



Tema 23 del programa: Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales: informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

DOCUMENTO A/6300/REV.1*

Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

INDICE

		Página
CARTA DE ENVÍO		5
<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	
I. ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ ESPECIAL		
A. Establecimiento del Comité Especial	1-12	5
B. Apertura de las sesiones del Comité Especial en 1966.....	13-38	8
C. Organización de los trabajos	39-143	11
D. Reuniones del Comité Especial, de su Grupo de Trabajo y de los Subcomités	144-178	21
E. Examen de territorios	179-183	23
F. Envío de misiones visitadoras a los territorios	184-223	24
G. Aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General y de las resoluciones pertinentes del Comité Especial: solicitudes dirigidas a las instituciones internacionales y a los organismos especializados	224-262	28
H. Cuestión de la lista de los territorios a los que se aplica la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales	263-269	32
I. Examen de otras cuestiones	270-295	33
J. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas	296-308	36
K. Examen de los trabajos	309-324	38
L. Trabajo futuro	325-336	41
M. Aprobación del informe	337	42
<i>Anexo I. Párrafos 6 a 13 del informe del Subcomité III.....</i>		42
<i>Anexo II. Informe del Subcomité II</i>		42
II. REUNIONES CELEBRADAS EN ÁFRICA		
Introducción	1-17	43
A. Reuniones celebradas en Dar es Salaam, República Unida de Tanzania	18-121	45
B. Reuniones celebradas en Mogadiscio, Somalia	122-231	54
C. Reuniones celebradas en Addis Abeba, Etiopía	232-305	63
D. Reuniones celebradas en El Cairo, República Árabe Unida.....	306-439	69
E. Reuniones celebradas en Argel, Argelia	440-594	81
F. Decisiones adoptadas con ocasión de la visita del Comité Especial a África	595-626	97
<i>Anexos I y II</i>		102

* La presente versión agrupa el texto de los documentos siguientes tal como fueron distribuidos en forma mimeografiada: A/6300 (parte I), del 30 de noviembre de 1966; A/6300 (parte II), del 21 de noviembre de 1966; A/6300/Add.1 (parte I), del 7 de octubre de 1966; A/6300/Add.1 (parte II), del 7 de octubre de 1966; A/6300/Add.2, del 20 de septiembre de 1966; A/6300/Add.3 (parte I) y Corr.1, del 8 y 17 de noviembre de 1966; A/6300/Add.3 (parte II), del 8 de noviembre de 1966; A/6300/Add.4, del 21 de octubre de 1966; A/6300/Add.5, del 19 de septiembre de 1966; A/6300/Add.6, del 8 de noviembre de 1966; A/6300/Add.7, del 25 de noviembre de 1966; A/6300/Add.8, del 24 de noviembre de 1966; A/6300/Add.9, del 16 de noviembre de 1966; y A/6300/Add.10, del 30 de noviembre de 1966. Para una lista de los documentos pertinentes véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 23 del programa.

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
III. RHODESIA DEL SUR		
<i>Parte I</i>		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en 1965	1-16	103
B. Información relativa al Territorio	17-335	106
C. Examen por el Comité Especial	336-531	136
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	532-588	159
E. Información complementaria sobre el Territorio	589-738	165
F. Nuevo examen por el Comité Especial	739-971	180
G. Nuevas medidas adoptadas por el Comité Especial	972-1098	204
<i>Apéndices I a III</i>		215
<i>Parte II</i>		
H. Estudio de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en Rhodesia del Sur, así como de su modo de funcionamiento	1099-1134	218
<i>Anexo.</i> Informe del Subcomité I	1-103	221
<i>Apéndices I y II</i>		231
IV. AFRICA SUDOCCIDENTAL		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial y por la Asamblea General en 1965	1-5	289
B. Información sobre el territorio	6-68	290
C. Examen de la cuestión por el Comité Especial	69-252	297
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	253-308	316
E. Nuevo examen de la cuestión por el Comité Especial	309-379	321
F. Nuevas medidas adoptadas por el Comité Especial	380	328
G. Examen de peticiones	381-384	328
<i>Apéndice.</i> Informe del Subcomité del África Sudoccidental	1-35	329
V. TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACIÓN PORTUGUESA		
<i>Parte I</i>		
A. Medidas adoptadas en 1965 por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Comité Especial	1-9	332
B. Información sobre los Territorios	10-244	333
C. Examen por el Comité Especial	245-648	363
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	649-676	407
<i>Parte II</i>		
E. Examen de las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los Territorios bajo administración portuguesa	677-688	411
<i>Anexo.</i> Informe suplementario del Subcomité I	1-91	412
<i>Apéndices I a V</i>		420
VI. ADÉN		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1965 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-3	514
B. Información sobre el Territorio	4-58	515
C. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto de ciertas peticiones procedentes de Adén	59-99	521
D. Medidas preliminares adoptadas por el Comité Especial	100-153	526
E. Examen por el Comité Especial	154-336	532
F. Medidas adoptadas por el Comité Especial	337-383	553
G. Nuevo examen por el Comité Especial	384-430	559
<i>Anexos I a V</i>		565
VII. BASUTOLANDIA, BECHUANIA Y SWAZILANDIA		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y 1965 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-4	569
B. Información sobre los Territorios	5-135	570
C. Examen de la cuestión por el Comité Especial	136-213	582

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	214-238	591
E. Información suplementaria sobre los Territorios	239-326	593
F. Nuevo examen de la cuestión por el Comité Especial	327-389	601
G. Otras medidas adoptadas por el Comité Especial	390-398	609
H. Examen del informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia	399-453	609
<i>Apéndices I y II</i>		614
<i>Apéndice III. Informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia</i>	1-15	615
<i>Anexo</i>		616
VIII. ISLAS VITI		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-2	617
B. Información sobre el Territorio	3-30	617
C. Examen por el Comité Especial	31-98	620
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	99-121	628
IX. GUINEA ECUATORIAL (FERNANDO POO Y RÍO MUNI)		
A. Medidas adoptadas anteriormente por el Comité Especial y la Asamblea General	1-3	630
B. Información sobre el Territorio	4-32	631
C. Examen por el Comité Especial	33-54	633
D. Decisión adoptada por el Comité Especial	55-91	635
E. Nuevo examen por el Comité Especial	92-94	638
F. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) ..	95-114	639
<i>Anexo. Informe del Subcomité de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni)</i>	1-311	641
<i>Apéndices I a IV</i>		667
X. IFNI Y EL SÁHARA ESPAÑOL		
A. Medidas adoptadas previamente por el Comité Especial y la Asamblea General	1-3	669
B. Información sobre los Territorios	4-61	669
C. Examen por el Comité Especial	62-115	673
D. Decisión adoptada por el Comité Especial	116	679
E. Nuevo examen por el Comité Especial	117-191	679
F. Nuevas medidas adoptadas por el Comité Especial	192-243	687
<i>Anexo</i>	1-5	692
XI. GIBRALTAR		
A. Medidas adoptadas anteriormente por el Comité Especial y por la Asamblea General	1-2	692
B. Información sobre el Territorio	3-22	693
C. Examen por el Comité Especial	23-54	694
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	55-66	698
XII. SOMALIA FRANCESA		
A. Información sobre el Territorio	1-66	699
B. Examen por el Comité Especial	67-158	704
C. Nuevo examen por el Comité Especial	159-218	715
D. Decisión adoptada por el Comité Especial	219	721
<i>Anexos I a III</i>		721
XIII. OMÁN		
A. Examen anterior y decisiones adoptadas por la Asamblea General	1-5	728
B. Información sobre Omán	6-70	729
C. Examen de la cuestión por el Comité Especial	71-117	736
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	118	740
<i>Anexos I y II</i>		740

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
XIV. ISLA MAURICIO, ISLAS SEYCHELLES Y SANTA ELENA		
A. Actuación anterior del Comité Especial y de la Asamblea General	1-4	745
B. Información sobre los Territorios	5-152	746
C. Examen por el Comité Especial	153-203	759
D. Decisión adoptada por el Comité Especial sobre el informe del Subcomité I	204	764
Anexo. Informe del Subcomité I	1-65	764
XV. ISLAS GILBERT Y ELLICE, ISLA PITCAIRN E ISLAS SALOMÓN		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-2	770
B. Información sobre los Territorios	3-30	771
C. Examen por el Comité Especial	31-32	773
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité II	33-35	773
Anexo. Informe del Subcomité II	1-25	773
XVI. NIUE E ISLAS TOKELAU		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-2	776
B. Información sobre los Territorios	3-17	776
C. Examen por el Comité Especial	18	777
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité II	19-22	777
Anexo. Informe del Subcomité II	1-26	778
XVII. NUEVAS HÉBRIDAS		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-2	781
B. Información sobre el Territorio	3-19	781
C. Examen por el Comité Especial	20-21	782
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité II	22-24	783
Anexo. Informe del Subcomité II	1-21	783
XVIII. SAMOA AMERICANA, GUAM Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-4	784
B. Información sobre los Territorios	5-43	785
C. Examen por el Comité Especial	44-54	788
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité II	55-66	790
Anexo. Informe del Subcomité II	1-31	791
XIX. TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NAURU, PAPUA Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NUEVA GUINEA, E ISLAS COCOS (KEELING)		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-6	794
B. Información sobre los Territorios	7-48	795
C. Examen por el Comité Especial	49-66	799
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité II	67-73	801
Anexo. Informe del Subcomité II	1-29	802
XX. BRUNEI		
Información sobre el Territorio	1-14	805
XXI. HONG KONG		
Información sobre el Territorio	1-23	807

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
XXII. ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTÓBAL-NIEVES-ANGUILLA, SANTA LUCÍA, SAN VICENTE, BARBADA, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS, ISLAS CAIMÁN, ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) Y HONDURAS BRITÁNICA		
A. Medidas adoptadas por el Comité Especial en 1964 y por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones	1-9	809
B. Información sobre los Territorios	10-324	811
C. Examen por el Comité Especial	325-449	837
D. Medidas adoptadas por el Comité Especial	450-469	854
<i>Anexo.</i> Informe del Subcomité III	1-212	857
XXIII. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS TRANSMITIDA EN VIRTUD DEL INCISO e DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CUESTIONES CONEXAS	1-44	879
<i>Apéndice</i>	1-4	883
ANEXO. Lista de delegaciones		885

CARTA DE ENVIO

30 de noviembre de 1966

Excmo. Sr. Secretario General:

De conformidad con la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1965, tengo el honor de enviar a V. E. el informe que el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales ha preparado para la Asamblea General. En este informe se describen las actividades del Comité Especial durante el año 1966.

Aprovecho la ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Gershon B. O. Collier
Presidente

Excmo. U Thant
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York

CAPÍTULO I*

ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACION Y ACTIVIDADES DEL COMITE ESPECIAL

A. ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ ESPECIAL

1. En su decimoquinto período de sesiones, en virtud de su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

2. En su decimosexto período de sesiones la Asamblea General examinó la situación respecto de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y aprobó la resolución 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, en virtud de la cual creó un Comité Especial de diecisiete miembros al que encargó de examinar la cuestión

de la aplicación de la Declaración, formular sugerencias y recomendaciones sobre los progresos realizados y el alcance de la aplicación de dicha Declaración, e informar al respecto a la Asamblea General en su decimoséptimo período de sesiones. Se encargó al Comité Especial que, "para llevar a cabo su labor, utilizara todos los medios que tuviese a su disposición, con arreglo a los procedimientos y normas que determinase para el buen desempeño de sus funciones".

3. En su decimoséptimo período de sesiones, después de examinar el informe del Comité Especial¹, la Asamblea General aprobó la resolución 1810 (XVII)

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300 (parte I).

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del programa, documento A/5238.

de 17 de diciembre de 1962, en virtud de la cual decidió ampliar el Comité Especial agregándole siete miembros. Asimismo, por dicha resolución invitó al Comité Especial "a continuar investigando los medios más apropiados para aplicar rápida e íntegramente la Declaración a todos los territorios que no habían logrado aún su independencia".

4. En el mismo período de sesiones la Asamblea General, por su resolución 1805 (XVII) de 14 de diciembre de 1962 sobre la cuestión del Africa Sudoccidental, pidió al Comité Especial que realizara, *mutatis mutandis*, las tareas asignadas por la resolución 1702 (XVI) a la Comisión Especial para el Africa Sudoccidental. Por su resolución 1806 (XVII) de 14 de diciembre de 1962, la Asamblea General decidió disolver la Comisión Especial para el Africa Sudoccidental.

5. La Asamblea General, en su decimoctavo período de sesiones, después de examinar el informe del Comité Especial², aprobó la resolución 1956 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963. En virtud de esta resolución, la Asamblea General pidió al Comité Especial "que continúe investigando los medios más apropiados para aplicar inmediata e íntegramente la Declaración a todos los territorios que no han logrado aún su independencia, y que informe a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones a más tardar".

6. En el mismo período de sesiones la Asamblea General, por su resolución 1899 (XVIII) de 13 de noviembre de 1963 sobre la cuestión del Africa Sudoccidental, pidió al Comité Especial que prosiguiera sus esfuerzos con objeto de cumplir las tareas que le habían sido asignadas por la resolución 1805 (XVII).

7. En el mismo período de sesiones, en virtud de su resolución 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, la Asamblea General decidió disolver la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos y pidió al Comité Especial que estudiara la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, pidió al Comité Especial que tuviera plenamente en cuenta dicha información al examinar la situación con respecto a la aplicación, en cada uno de los territorios no autónomos, de la Declaración y que emprendiera los estudios especiales y preparara los informes especiales que considerara necesarios.

8. En su decimonoveno período de sesiones la Asamblea General no pudo examinar el informe del Comité Especial sobre su labor en 1964³. No obstante, en 1965 el Comité Especial siguió desempeñando sus funciones dentro del contexto de la declaración formulada por el Presidente de la Asamblea General en la 1330a. sesión plenaria del decimonoveno período de sesiones, celebrada el 18 de febrero de 1965, en el sentido de que la Asamblea General, para sus propias actas oficiales, debería tomar nota de que ya se habían recibido los informes relativos, entre otras cosas, a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y que los órganos que, como el Comité Especial, estaban en sesión permanente, deberían seguir realizando su trabajo,

ateniéndose a las limitaciones del presupuesto para 1965 que habían sido convenidas.

9. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General, después de examinar los informes de 1964 (A/5800/Rev.1)⁴ y de 1965 (A/6000/Rev.1)⁵ del Comité Especial, aprobó la resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965 cuyo texto figura a continuación:

"La Asamblea General,

"Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que figura en su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, así como sus resoluciones 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, 1810 (XVII) de 17 de diciembre de 1962 y 1956 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963,

"Recordando asimismo sus resoluciones 1805 (XVII) de 14 de diciembre de 1962 y 1899 (XVIII) de 13 de noviembre de 1963, por las cuales confió tareas relativas al Africa Sudoccidental al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, así como su resolución 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, por la cual confió al Comité Especial nuevas funciones acerca de la información comunicada en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas,

"Habiendo examinado los informes preparados por el Comité Especial para los años 1964 (A/5800/Rev.1 y 1965 (A/6000/Rev.1),

"Tomando nota con profundo pesar de que, cinco años después de aprobada la Declaración, todavía hay muchos territorios bajo dominación colonial,

"Deplorando la actitud negativa de ciertas Potencias coloniales, y en particular la actitud inadmisible de los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica, que se niegan a reconocer a los pueblos coloniales el derecho a la independencia,

"Preocupada por la política de las Potencias coloniales que ponen en jaque los derechos de los pueblos coloniales al favorecer la afluencia sistemática de inmigrantes extranjeros y al dispersar, deportar y trasladar a los autóctonos,

"Tomando nota de las medidas adoptadas y previstas por el Comité Especial respecto de la lista de territorios a los que se aplica la Declaración,

"Deplorando igualmente la actitud de ciertos Estados que, a pesar de las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial, continúan colaborando con los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica e incluso les prestan una asistencia que estos dos Gobiernos emplean para intensificar la represión contra las poblaciones africanas oprimidas,

"Plenamente consciente de que la persistencia del régimen colonial y de la práctica del apartheid, así como de todas las formas de discriminación racial, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y un crimen contra la humanidad,

"Habiendo aprobado resoluciones sobre algunos territorios examinados por el Comité Especial,

² *Ibid.*, decimoctavo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1.

³ En su decimonoveno período de sesiones la Asamblea General aprobó la resolución 2005 (XIX) de 18 de febrero de 1965, por la que autorizó la vigilancia por las Naciones Unidas de las elecciones que habían de celebrarse en las Islas Cook en abril de 1965.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).*

⁵ *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

"1. *Reafirma* sus resoluciones 1514 (XV), 1654 (XVI), 1810 (XVII) y 1956 (XVIII);

"2. *Toma nota con satisfacción* de la labor realizada por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y le felicita por los esfuerzos que ha realizado para aplicar la Declaración;

"3. *Aprueba* los informes del Comité Especial e invita de nuevo a las Potencias administradoras a que apliquen las recomendaciones que figuran en ellos;

"4. *Deplora profundamente* que ciertas Potencias coloniales se nieguen a colaborar con el Comité Especial y continúen haciendo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General;

"5. *Hace un llamamiento* a las Potencias coloniales para que pongan fin a su política, que viola los derechos de los pueblos coloniales con la afluencia sistemática de inmigrantes extranjeros y con la dispersión, deportación y traslado de los autóctonos;

"6. *Pide* al Comité Especial que prosiga su labor y que continúe investigando los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la resolución 1514 (XV) a todos los territorios que aún no han logrado la independencia;

"7. *Aprueba* el programa de trabajo previsto por el Comité Especial para 1966, en especial la posibilidad de organizar una serie de reuniones en África y de enviar misiones visitadoras a los territorios, sobre todo a las regiones del Atlántico, del Océano Índico y del Pacífico;

"8. *Pide* al Comité Especial que preste suma atención a los territorios pequeños y que recomiende a la Asamblea General los medios más adecuados y las medidas que convenga adoptar para que las poblaciones de estos territorios pequeños puedan ejercer plenamente sus derechos a la libre determinación y la independencia;

"9. *Pide* al Comité Especial que, siempre que lo considere oportuno, recomiende una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los

territorios considerados, conforme a los deseos de su población;

"10. *Reconoce* la legitimidad de la lucha que los pueblos bajo el dominio colonial libran por el ejercicio de su derecho a la libre determinación y a la independencia, e invita a todos los Estados a prestar ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional de los territorios coloniales;

"11. *Pide* a todos los Estados y a las instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se abstengan de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica mientras no renuncien ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial;

"12. *Pide* a las Potencias coloniales que desmantelen las bases militares instaladas en los territorios coloniales y que se abstengan de establecer otras nuevas;

"13. *Pide* al Comité Especial que informe al Consejo de Seguridad de todos los hechos nuevos que hayan ocurrido en cualquiera de los territorios que examine y que puedan constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que haga sugerencias que el Consejo pueda atender al estudiar las medidas que conviene adoptar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

"14. *Invita* al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias para lograr una amplia difusión de la Declaración y dar a conocer ampliamente los trabajos del Comité Especial, a fin de que la opinión pública mundial pueda estar bien informada acerca de la grave amenaza que constituyen para la paz el colonialismo y el apartheid, e invita a todas las Potencias administradoras a colaborar con el Secretario General en la realización de su tarea;

"15. *Pide* al Secretario General que siga proporcionando al Comité Especial todos los medios y el personal requeridos para el cumplimiento de su mandato."

10. En el mismo período de sesiones la Asamblea General aprobó varias otras resoluciones en las cuales se asignaban al Comité Especial tareas concretas. Entre éstas figuraban las siguientes resoluciones sobre los temas indicados:

Resolución No.	Aprobada el	Tema
2023 (XX)	5 de noviembre de 1965	Adén
2063 (XX)	16 de noviembre de 1965	Basutolandia, Bechuania y Swazilandia
2065 (XX)	16 de diciembre de 1965	Islas Malvinas (Falkland Islands)
2066 (XX)	16 de diciembre de 1965	Isla Mauricio
2067 (XX)	16 de diciembre de 1965	Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni)
2068 (XX)	16 de diciembre de 1965	Islas Viti
2069 (XX)	16 de diciembre de 1965	Antigua, Bahamas, Barbada, Bermudas, Dominica, Granada, Guam, Isla Pitcairn, Islas Caimán, Islas Cocos (Keeling), Islas Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas Seychelles, Islas Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, Montserrat, Niue, Nuevas Hébridas, Papua, Samoa Americana, San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente, Santa Elena, Santa Lucía
2070 (XX)	16 de diciembre de 1965	Gibraltar
2072 (XX)	16 de diciembre de 1965	Ifni y Sáhara español

Resolución No.	Aprobada el	Tema
2073 (XX)	17 de diciembre de 1965	Omán
2074 (XX)	17 de diciembre de 1965	África Sudoccidental
2076 (XX)	17 de diciembre de 1965	Programas especiales de enseñanza y capacitación para el África Sudoccidental
2106 (XX)	21 de diciembre de 1965	Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
2108 (XX)	21 de diciembre de 1965	Programa especial de capacitación para los territorios bajo administración portuguesa
2109 (XX)	21 de diciembre de 1965	Información sobre los territorios no autónomos transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas
2110 (XX)	21 de diciembre de 1965	Facilidades de estudio y formación profesional ofrecidas por Estados Miembros a los habitantes de los territorios no autónomos
2111 (XX)	21 de diciembre de 1965	Territorio en fideicomiso de Nauru
2112 (XX)	21 de diciembre de 1965	Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y Territorio de Papúa
2116 (XX)	21 de diciembre de 1965	Programa de conferencias y métodos de trabajo

11. En la 1408a. sesión plenaria, celebrada el 21 de diciembre de 1965, el Presidente de la Asamblea General anunció la designación del Afganistán como miembro del Comité Especial para cubrir la vacante producida al retirarse Camboya⁶ del Comité. En consecuencia, el Comité Especial estuvo integrado por los veinticuatro miembros siguientes:

Afganistán	Polonia
Australia	Reino Unido de Gran
Bulgaria	Bretaña e Irlanda del
Costa de Marfil	Norte
Chile	República Unida de
Dinamarca	Tanzania
Estados Unidos de	Sierra Leona
América	Siria
Etiopía	Túnez
India	Unión de Repúblicas
Irak	Socialistas Soviéticas
Irán	Uruguay
Italia	Venezuela
Madagascar	Yugoslavia
Mali	

12. El presente informe abarca la labor realizada por el Comité Especial en el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de noviembre de 1966, durante el cual celebró 90 sesiones plenarias, cuarenta de ellas en África, y su Grupo de Trabajo y Subcomités celebraron más de 100 sesiones.

B. APERTURA DE LAS SESIONES DEL COMITÉ ESPECIAL EN 1966

13. El Secretario General abrió la primera reunión del Comité Especial en 1966 (394a. sesión), que se celebró el 8 de marzo.

Discurso de apertura del Secretario General

14. El Secretario General dio la bienvenida a los miembros del Comité Especial y, en particular, a la delegación del Afganistán, miembro más reciente del Comité.

⁶ *Ibid.*, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5983.

15. Indicó que, en la Introducción a su última Memoria Anual sobre la labor de la Organización⁷, había hecho observar que, aunque se habían registrado algunos hechos positivos, los problemas principales en materia de descolonización seguían sin tender positivamente una solución pacífica. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General la mayoría de las delegaciones habían expresado honda inquietud ante el continuo retraso de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En consecuencia, la Asamblea General, por su resolución 2105 (XX), había pedido al Comité Especial que continuase investigando los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la Declaración a todos los Territorios que aún no hubiesen alcanzado la independencia. Inspirada en las mismas consideraciones, la Cuarta Comisión había estudiado por primera vez aisladamente no sólo los problemas coloniales más difíciles, sino la mayoría de los Territorios de los cuales el Comité Especial se había ocupado. De ese modo, la Asamblea General, por recomendación de la Cuarta Comisión, había podido aprobar resoluciones concernientes concretamente a determinados Territorios, en las que se exponían la orientación, la insistencia y la actuación requeridas en cada caso para aplicar la Declaración.

16. En su nota de 11 de febrero de 1966 (A/AC.109/L.260), el Secretario General había señalado a la atención de los miembros las resoluciones aprobadas por la Asamblea en su vigésimo período de sesiones y referentes a la labor del Comité Especial. También difundió una nota (A/AC.109/L.261) en la que se subrayaban puntos concretos que los miembros tal vez desearan tener en cuenta al preparar el programa de trabajo para 1966.

17. Los principales problemas planteados ante el Comité Especial no habían mejorado y, en particular, la situación en Rhodesia del Sur estaba aumentando la grave inquietud que ya sentían los Estados Miembros. El orador pensaba que quizá conviniera recordar recientes declaraciones oficiales del Gobierno del Reino Unido, a efectos de que seguiría buscando un fin rápido

⁷ *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Suplemento No. 1 A.

a la rebelión del Territorio y se ayudaría al pueblo de Rhodesia del Sur a emprender de nuevo la senda hacia un gobierno de la mayoría y la creación de una sociedad justa y libre de discriminaciones. Cabía esperar que fuera posible avanzar rápidamente en ese sentido y que, conforme con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, el Gobierno del Reino Unido adoptara sin tardanza las medidas necesarias para que el pueblo de Rhodesia del Sur pudiera determinar su propio porvenir con arreglo a los objetivos de la Declaración.

18. Respecto de los Territorios bajo administración portuguesa, dijo que el Gobierno del Portugal había seguido haciendo caso omiso de las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas: ni había dado efecto al principio de libre determinación expuesto en esas resoluciones ni había indicios de que fuera a cambiar sus propósitos de integración políticoeconómica de los Territorios con Portugal. El Comité Especial desearía probablemente seguir ocupándose con la situación de esos Territorios, descrita por el Consejo de Seguridad como un serio trastorno de la paz y la seguridad internacionales.

19. La negativa del Gobierno de Sudáfrica a aplicar las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial respecto del Africa Sudoccidental había sido también motivo de grave preocupación. Lejos de abandonar su política de apartheid, el Gobierno de Sudáfrica parecía adoptar diversas medidas para seguir imponiendo esa política, incluso la de establecer "territorios patrios" para los no europeos. El Secretario General opinaba que el Comité querría indudablemente estudiar esa grave situación a la luz de los hechos de actualidad.

20. La Asamblea General, en su resolución 2063 (XX), había pedido al Comité Especial que estudiase, en colaboración con el Secretario General, las medidas necesarias para asegurar la integridad y la soberanía territorial de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. Al transmitir a los gobiernos la resolución de la Asamblea General, el orador les había preguntado hasta qué punto estarían dispuestos a contribuir al Fondo para el desarrollo económico de dichos Territorios. Recordó que ese Fondo había sido objeto de una de las recomendaciones que formuló en 1965 y a la cual el Comité Especial y la Asamblea General dieron su apoyo. Una reacción positiva de parte de los gobiernos sería un paso constructivo hacia el logro de los objetivos del Comité Especial y de la Asamblea General.

21. La Asamblea General también había pedido al Comité Especial que prestase particular atención a los Territorios pequeños, tarea que se facilitaría con un conocimiento adecuado de su situación política, económica y social y acerca de la opinión, los deseos y las aspiraciones de sus pueblos. A este respecto le parecía muy oportuna la intención del Comité Especial de valerse de grupos visitadores, propósito apoyado por la Asamblea General.

22. Hizo observar que la labor del Comité Especial en 1966 sería sumamente onerosa y que el programa de reuniones resultaría por ende proporcionalmente recargado. Por lo tanto, señaló a la atención de los miembros la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General sobre el programa de conferencias y expresó la esperanza de que, al trazar su programa de trabajo, el Comité apreciase la necesidad de una planificación racional para facilitar el suministro de los servicios técnicos y sustantivos que había menester.

23. El orador hizo votos por el éxito de la labor del Comité y confiaba en que seguiría contribuyendo provechosamente a la aplicación de la Declaración en condiciones de paz y armonía. Añadió que cabía esperar que el Comité Especial recibiera toda la cooperación necesaria de las Potencias administradoras interesadas.

Declaración de los miembros

24. El representante de Malí dio las gracias al Secretario General por haber acudido en persona a inaugurar la primera reunión que en 1966 celebraba el Comité. Su declaración sería fuente en que se inspirarían los miembros del Comité, que en él veían un ardiente defensor de la justicia y la libertad, dedicado sin descanso a asegurar el respeto a los derechos de los pueblos oprimidos.

25. El Comité Especial iniciaba sus sesiones en una época muy inquieta. La situación internacional se caracterizaba por graves crisis que en cualquier momento podían degenerar en un conflicto mundial. Las causas fundamentales de esas crisis eran las muchas violaciones del derecho de los pueblos a la libre determinación y el gran número de intervenciones extranjeras en los asuntos internos de otros países. Mientras los pueblos que todavía estaban bajo la férula colonial seguían empeñados en la lucha de liberación nacional contra las fuerzas coloniales, los países recién independizados estaban sometidos al ataque cada día más acerbo del imperialismo y del neocolonialismo. El afán de las Potencias coloniales y neocoloniales por conservar su dominio político y económico constituía una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, en la que se consignan importantes disposiciones sobre el derecho de libre determinación. El orador estimó que el Comité Especial no debía cejar en sus esfuerzos por lograr que los pueblos coloniales ejercieran cabalmente su derecho a la independencia y la libre determinación. También debía denunciar enérgicamente los abusos de las Potencias coloniales.

26. El representante de Afganistán manifestó que su país consideraba un privilegio y honor el ser miembro del Comité Especial. Además de haber apoyado siempre resueltamente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el Afganistán jamás había dejado de aprobar sin reservas las recomendaciones del Comité Especial. El apego del Afganistán a la causa de la abolición del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones era histórico: fue el primer país de Asia en oponerse al colonialismo tan pronto apareció éste; a costa de inauditos sacrificios lo combatió y pudo por fin contarse, con otros pueblos y naciones del mundo, como adalid de esa causa, consagrada en la mente y la conciencia de la humanidad, que se reflejaba en la Declaración. Tal era el espíritu que animaba al Afganistán a cooperar decididamente con el Comité Especial en sus esfuerzos por instaurar la justicia y la igualdad entre todos los pueblos y naciones. El mayor deseo del Afganistán era que todos los pueblos y naciones alcanzaran sus objetivos y colmaran sus aspiraciones mediante la comprensión y por medios pacíficos.

27. El representante de Etiopía expresó el aprecio de su delegación por las acertadas manifestaciones del Secretario General, que para el Comité serían una ayuda y guía en su labor. Añadió que su delegación estaba convencida de que, aunque ciertas minorías racistas persistían aún en el fútil afán de oponerse a la inexo-

nable marcha de la historia, el Comité seguiría cumpliendo con firmeza sus obligaciones hasta que todos los pueblos coloniales quedaran emancipados y la libertad e independencia sustituyesen a la dominación colonial.

28. El representante del Uruguay, en nombre de los países de América Latina, representados en el Comité por su propia delegación y las de Chile y Venezuela, afirmó que los países latinoamericanos no sólo habían sido siempre resueltos defensores de la ley, la democracia y la libertad, sino que habían apoyado sin vacilar los principios sostenidos por el Comité en sus esfuerzos por liberar a los pueblos oprimidos y extirpar el colonialismo, para que el imperio de la ley y la libertad fueran los principios rectores de la coexistencia de hombres y naciones.

29. El representante de la República Unida de Tanzania dio las gracias al Secretario General por las acertadas palabras que había pronunciado. La República Unida de Tanzania siempre había apreciado la valía del Comité, pues no consideraría que su propia independencia fuese absoluta hasta que todos los africanos del continente pudieran respirar el aire de la libertad. Tanzania aguardaba con afán el día en que consiguieran la independencia todos los que padecían el yugo colonial. Su política respecto de los males del colonialismo estaba muy clara y nunca se desviaría de ella. La delegación de Tanzania trabajaría incansablemente por la causa de la descolonización y colaboraría con todos los que se esforzaban por extirpar el colonialismo y, por ende, rematar en breve la tarea del Comité.

30. El representante de la Costa de Marfil indicó que, como había subrayado el Secretario General en sus alentadoras palabras al Comité, la tarea que la Asamblea General había confiado al Comité era de gran magnitud. Tenía la certeza de que todos los miembros del Comité abordarían esa tarea con el mismo espíritu que siempre les animó y que con tanto acierto habían comprendido los miembros salientes de la Mesa, por cuya labor sentía su delegación gran aprecio.

31. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó el agradecimiento de su delegación al Secretario General por el constante interés que demostraba por la labor del Comité. Manifestó que la declaración del Secretario General en la presente sesión y su apoyo al Comité Especial inspirarían sin duda alguna a sus miembros a hacer todo lo posible dentro del marco de las Naciones Unidas, para poner por obra los nobles ideales de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Dio la bienvenida a la delegación de Afganistán como nuevo miembro del Comité Especial y se declaró convencido de que ese país, cuyos inagotables esfuerzos en la lucha contra las fuerzas del colonialismo eran bien conocidos, aportaría una valiosa contribución al empeño común por la rápida liquidación de los regímenes coloniales que aún existían.

Elección de la Mesa

32. En la 394a. sesión, celebrada el 8 de marzo de 1966, el Comité Especial eligió por unanimidad la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Gershon Collier (Sierra Leona).

Vicepresidentes: Sr. José Piñera (Chile); Sr. John Malecela (República Unida de Tanzania).

Relator: Sr. Ala'uddin Aljubouri (Irak).

Declaración del Presidente

33. El Presidente dio las gracias a los miembros del Comité Especial por el gran honor conferido a su país y su persona, y añadió que esperaba poder encauzar la labor del Comité por sendas provechosas con arreglo a las normas sentadas por su ilustre antecesor.

34. Deseaba también expresar al Secretario General la gratitud del Comité por haber acudido a la reunión y pronunciado una declaración tan completa sobre los trabajos y problemas del Comité.

35. Señaló que el Comité Especial había contribuido notablemente al proceso de descolonización en todo el mundo. Gracias a su visita en 1965 al África había podido dar a conocer de cerca su labor a los pueblos africanos que todavía padecían el dominio colonial, y había logrado divulgar sus trabajos. Como todavía quedaban millones de seres humanos que luchaban por conseguir la igualdad y la dignidad, el Comité debía esforzarse por cumplir su mandato con renovado vigor. Debía llevar sus actividades fuera de Nueva York para que alcanzaran a las víctimas del colonialismo en todo el planeta, sobre todo en África. La cooperación de todos los miembros era esencial para que los trabajos del Comité fueran reflejo auténtico del consenso de las Naciones Unidas y demostraran que la Organización estaba cabalmente resuelta a extirpar el colonialismo. Los esfuerzos del Comité Especial contribuirían mucho a sostener el imperio de la ley y a ennoblecer a las Naciones Unidas como verdadera conciencia de la comunidad internacional.

Declaración del Presidente saliente

36. El Sr. Sori Coulibaly (Malí), en calidad de Presidente saliente, dijo que el progreso de la descolonización era lento, no porque el Comité hubiera escatimado ningún esfuerzo, sino porque había personas y gobiernos que no creían en la igualdad de los pueblos y continuaban violando los principios de la Carta. Gobiernos, empresas imperialistas e individuos que vivían de la explotación de los demás y preferían olvidar todo principio humanitario y obtener un lucro desmedido a expensas de la sangre y sudor de los patriotas de Angola, Mozambique, la llamada Guinea Portuguesa, África Sudoccidental, Rhodesia del Sur, Sudáfrica y otras partes. El Gobierno de Portugal asesinaba y torturaba a los africanos para mantener los privilegios que sostenían con vida a una metrópoli atrasada e incapaz de adaptación. En Sudáfrica y en el África Sudoccidental el apartheid y un régimen de policía servían para mantener en la opulencia a la población blanca, mientras se hacinaba a los africanos en reservas en la tierra de sus antepasados. En Rhodesia del Sur una minoría blanca racista proclamaba la independencia del Territorio para perpetuar su dominio sobre casi 4 millones de africanos.

37. La persistencia de estas situaciones anacrónicas constituía una amenaza a la paz y seguridad internacionales y un desafío a las Naciones Unidas y al Comité Especial. El Comité iba a ocupar un lugar importante en la historia de la lucha contra la injusticia, la explotación y la humillación. El colonialismo y el apartheid debían liquidarse lo antes posible, ya que constituían una deshonra para la humanidad. En una época en que el hombre se liberaba de las leyes de la gravedad y se paseaba por el espacio ultraterrestre, la dominación colonial y el apartheid resultaban paradójicas, injustas, humillantes y odiosas. Los pueblos colonizados, que pa-

decían no sólo la explotación, sino la humillación, tenían grandes esperanzas en el Comité. El Comité debía ir a sus países, compartir su trágica vida y hacer saber al mundo su situación. Debía combatir con energía a las Potencias coloniales y presionar eficazmente a todos los Estados que prestaban asistencia a estas Potencias o eran responsables de las actividades de las minorías racistas que se habían apoderado ilegalmente del poder en ciertos territorios coloniales. La delegación de Afganistán aportaría sin duda una importante contribución a los trabajos del Comité.

38. El orador expresó su gratitud a todos sus amigos y colegas por su confianza y comprensión, y al Subsecretario y demás miembros de la Secretaría por su asistencia. Los homenajes de los miembros del Comité le habían revelado que las diferencias de opinión que se habían producido ocasionalmente no habían afectado los profundos sentimientos de amistad y respeto que los unía.

C. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

39. El Comité Especial debatió la organización de sus trabajos para el año en curso en sus sesiones 394a., 395a. a 397a. y 399a., en las que los miembros hicieron declaraciones de carácter general.

Declaraciones de los miembros

40. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el Comité debía adoptar métodos que le permitieran avanzar hacia la finalidad proclamada en la Carta y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a saber, garantizar a todos los pueblos, grandes y pequeños, el derecho a la libre determinación y a la independencia. Si bien una parte decisiva en la lucha por la eliminación definitiva de los regímenes coloniales correspondería, naturalmente, a los pueblos mismos, con la ayuda que les prestasen muchos Estados que habían adoptado una política anticolonialista, el Gobierno de la Unión Soviética consideraba que las Naciones Unidas, por ser el foro internacional más universal, podían y debían desempeñar una útil función en esa lucha.

41. La aprobación en 1960 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, las decisiones de la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, por las que se reconocía la legalidad de la lucha de los pueblos por la libertad y la independencia, el llamamiento de la Asamblea General a todos los Estados para que prestasen asistencia moral y material en esa lucha, y la condenación del colonialismo en todas sus manifestaciones como un crimen de lesa humanidad y una amenaza a la paz y seguridad internacionales, habían constituido un apoyo político importante en la lucha del pueblo para sacudir el yugo colonial.

42. El Comité Especial tenía una función particular que desempeñar en la lucha anticolonialista desenmascarando a los colonialistas y llamando la atención sobre la situación de los Territorios coloniales. Al orador le parecía que el Comité había obrado acertadamente el año pasado cuando, a iniciativa de los Estados de África y de Asia y de los Estados socialistas, había decidido celebrar una serie de reuniones en países africanos. Esas reuniones tuvieron resultados positivos y permitieron al Comité conseguir la participación en sus trabajos de

muchos representantes de movimientos nacionales de liberación de las colonias de África, para la elaboración y adopción de medidas más eficaces que habían servido de base a las decisiones de la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, para establecer contacto con la Organización de la Unidad Africana y para robustecer la unidad de los países que apoyaban la rápida eliminación de los regímenes coloniales restantes. No cabía ninguna duda de que debía continuarse la experiencia y, en conformidad con el párrafo 7 de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, el Comité debía decidir celebrar una serie de sesiones en África en el año en curso.

43. Su delegación había apoyado la mencionada resolución y seguía creyendo que resultaba indispensable y de suma utilidad celebrar otras sesiones en África. En sus reuniones en África el Comité podría realizar un examen integral de los progresos logrados en el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Comité mismo sobre cuestiones tan importantes como las de Rhodesia del Sur, las colonias portuguesas, el África Sudoccidental, además de otros asuntos relacionados con la eliminación de los regímenes coloniales en África. Podría también expresar su opinión sobre las medidas que debían tomar la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para obligar a los colonialistas a acatar las decisiones de las Naciones Unidas sobre esos problemas.

44. La delegación de la Unión Soviética acogía con agrado la invitación formulada al Comité Especial por el Gobierno de Tanzania para que viajara a Dar es Salaam en 1966 y celebrara algunas de sus reuniones en África en las proximidades de los lugares donde se desarrollaba la lucha de los africanos que querían liberarse del yugo colonialista. La delegación de la URSS deseaba también expresar su apoyo de la idea formulada por varias delegaciones en el curso de las sesiones del Comité en África, en el sentido de que el Consejo de Seguridad debiera reunirse en África para estudiar la situación de Rhodesia del Sur y de las colonias portuguesas, y examinar la política de apartheid que practicaba el Gobierno de la República Sudafricana en Sudáfrica y en el África Sudoccidental. Ello permitiría a los representantes de los países africanos y a los jefes de los movimientos nacionales de liberación participar en el trabajo del Consejo con el fin de elaborar medidas concretas, de conformidad con la Carta, para lograr el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas. Permitiría también coordinar el trabajo del Consejo de Seguridad y de la Organización de la Unidad Africana sobre tales problemas.

45. En el curso del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General los representantes de varias organizaciones nacionales y patrióticas del África Sudoccidental, así como la abrumadora mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, habían condenado resueltamente la política que aplicaba el régimen racista de Verwoerd con respecto al África Sudoccidental, y habían pedido el cumplimiento incondicional de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a ese Territorio. En especial, muchas delegaciones se habían mostrado partidarias de que las Naciones Unidas decidieran poner término al mandato de Sudáfrica sobre el África Sudoccidental y tomar medidas concretas para traspasar el poder en el Territorio a los legítimos representantes del pueblo. La delegación de la Unión Soviética

prestaba su total apoyo a la opinión de tales delegaciones. El examen de la situación en el África Sudoccidental por el Comité Especial y la Asamblea General había demostrado que el Gobierno de Sudáfrica utilizaba el mandato para servir los intereses de monopolios internacionales y para la expansión de su política de anexión con respecto a dicho Territorio.

46. A su juicio, el Comité Especial obraría con entera justicia si se pronunciara en forma inequívoca en favor de la idea de que se retirase el mandato sobre el África Sudoccidental a la República Sudafricana y se recomendase a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad que tomaran las providencias que se imponían a este respecto. La delegación de la URSS compartía la opinión de varios Miembros de las Naciones Unidas de que se debía convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tan pronto como la Corte Internacional de Justicia hubiera concluido su proceso en el caso del África Sudoccidental, para que examinara el problema de poner término al mandato de Sudáfrica y formulara las debidas recomendaciones al Consejo de Seguridad a fin de que éste pudiera tomar las medidas del caso.

47. Era bien sabido que las Potencias coloniales recurrían a toda clase de maniobras para entorpecer el cumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas, con el fin de mantener su dominio en los territorios bajo su control. Recurrían a diversas clases de artificios constitucionales, al soborno y a la conspiración; dejaban a la gente pudrirse en prisión; mataban a miles de luchadores por la libertad y prohibían las actividades de partidos y organizaciones patrióticos y nacionalistas. Allí donde esos métodos de persecución y terror no producían los resultados esperados, los colonialistas recurrían a formas ostensibles de opresión militar y empleaban los medios más modernos de destrucción, incluso bombas de napalm y sustancias tóxicas. Interventaban en los asuntos internos de otros Estados e imponían sistemas que protegían los intereses de los monopolios imperialistas. Era evidente que ante tales intrigas colonialistas las Naciones Unidas y todos los Estados debían tomar nuevas y resueltas medidas que produjeran la eliminación definitiva de los vestigios del sistema colonial.

48. En consecuencia, la delegación de la URSS estimaba que en la etapa actual de los trabajos del Comité se debía prestar atención primordial a asegurar el cumplimiento, por las Potencias coloniales, de las decisiones adoptadas tanto por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, como por el Consejo de Seguridad con respecto a la concesión de la independencia a Rhodesia del Sur, a las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y la llamada Guinea portuguesa, el África Sudoccidental y toda la parte meridional de la península arábiga. La delegación de la URSS compartía la opinión expresada por varias delegaciones en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General de que el Comité debía examinar seriamente la cuestión de fijar fechas concretas para la concesión de la independencia a los Territorios coloniales de conformidad con los deseos de sus pueblos. Si los colonialistas rehusaran poner por obra tales decisiones y no concedieran la independencia dentro de la fecha fijada, debieran ser declarados agresores y ser objeto de las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta.

49. Durante el estudio del informe del Comité Especial en el vigésimo período de sesiones de la Asam-

blea General se había prestado considerable atención a la situación poco satisfactoria que presentaba el cumplimiento de los principios de la Declaración con respecto a los Territorios coloniales más pequeños. Se había sugerido que, en vista de la insuficiente información disponible acerca de tales territorios, debería enviarse allí a grupos visitadores que establecieran contacto directo con el pueblo y sus representantes. Era necesario dar cumplimiento a esa legítima petición de la Asamblea General. Si las Potencias coloniales estaban realmente en favor de la libre determinación de los pueblos, no debían seguir oponiéndose a que se trasladaran a esos territorios unos representantes del Comité Especial.

50. La Asamblea General había adoptado varias decisiones importantes sobre las consecuencias de las actividades que desarrollaban los monopolios extranjeros en los territorios coloniales, sobre la supresión de las bases militares en dichos territorios y la suspensión de toda asistencia económica, financiera o técnica de los organismos especializados de las Naciones Unidas, principalmente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional, a los Gobiernos de Portugal, de la República Sudafricana y a las autoridades del Gobierno colonialista blanco de Rhodesia del Sur. Los debates sostenidos en el Comité Especial habían demostrado claramente los perniciosos efectos de las actividades de los monopolios internacionales y la presencia de bases militares en dichos territorios, así como el peligro que suponían para la causa de la liberación de los pueblos de la opresión colonial. El Comité tenía que hacer todo lo posible para asegurarse de que se acataban las decisiones adoptadas por la Asamblea General sobre tales problemas, y debía pedir a las Potencias coloniales que le proporcionaran todas las informaciones pertinentes acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de tales decisiones.

51. El Comité no debía limitarse a presentar a la Asamblea General su informe sobre las consecuencias de las actividades desarrolladas por los monopolios extranjeros en África Sudoccidental y en los territorios portugueses; debía continuar, en cooperación con el Secretario General, el estudio de ese problema con respecto a esos territorios y con respecto a Rhodesia del Sur.

52. Por lo que hacía a las bases militares en los territorios coloniales, el Comité, en cooperación con el Secretario General, debía estudiar la cuestión de la perniciosa influencia de esas bases en la causa de la liberación de los pueblos de esos territorios de la opresión colonial, y debía formular recomendaciones a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad.

53. Además, el Presidente o los miembros de la Mesa del Comité debían establecer contacto directo con los organismos especializados y pedirles que presentaran información sobre las medidas tomadas o previstas para dar cumplimiento a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la cesación de la asistencia económica, financiera y técnica al Portugal, a la República de Sudáfrica y al Gobierno colonialista blanco de Rhodesia del Sur.

54. El Comité Especial podría tomar la iniciativa de señalar a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas y, en especial, de la Comisión de Asuntos Sociales y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ciertos aspectos de la criminal política que practicaban los colonialistas y que correspondían a la esfera de competencia de esos órganos. El orador

recordó que, a iniciativa del Comité Especial, se había incluido la cuestión de la flagrante violación de los derechos humanos en los territorios coloniales como asunto importante y de urgencia en el programa provisional del 22º periodo de sesiones de la Comisión, y confiaba en que continuaría tal cooperación entre los diversos órganos de las Naciones Unidas.

55. En la posguerra el movimiento nacional de liberación había asestado un golpe demoledor al sistema colonial del imperialismo, de la opresión y de la esclavitud, y sobre las ruinas del viejo mundo colonialista se habían construido docenas de nuevos países independientes. Los últimos vestigios del sistema colonial se estaban derrumbando, pero los colonialistas seguían presentando obstinada resistencia y haciendo todo lo posible para mantener su dominio. Era obligación de las Naciones Unidas y del Comité Especial ayudar a los pueblos que luchaban por su liberación, y hacer todo lo posible para que se cumplieran los principios de la Carta y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La posición del Gobierno de la Unión Soviética a este respecto se ceñía cabalmente a los propósitos y principios de la Declaración, y su delegación estaba dispuesta a cooperar estrechamente con todas las delegaciones que apoyaban el anticolonialismo.

56. En conclusión el orador informó al Comité que su Gobierno se contaba, desde la víspera, entre los de los nueve primeros países que habían firmado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

57. El representante de Italia dijo que su delegación venía a participar en el nuevo periodo de sesiones del Comité Especial con el firme convencimiento de que el Comité contribuía a una importante tarea, a saber, la transformación de la comunidad de naciones de una vieja estructura en un orden nuevo en el que habría libertad e igualdad de oportunidades para todas las naciones, bajo un régimen de derecho. Aunque esta transformación se había realizado ya en gran medida, el Comité aún estaba llamado a conseguir que desaparecieran de la faz de la tierra los restos del colonialismo y a procurar que esta transformación se llevara a cabo por medios pacíficos, por el proceso de la libre determinación. La Asamblea General había pedido al Comité que continuara señalando el problema de la descolonización a la atención pública mundial y, al mismo tiempo, que estudiara todos los detalles y complejidades — políticas, económicas, sociales y culturales — que habían impedido que alcanzasen rápidamente la independencia un número considerable de territorios cuyo caso seguía en estudio. El orador se refería en particular a la cuestión de los pequeños territorios, que figuraba en el programa y a la cual sugería que se concediera gran prioridad.

58. La delegación de Italia creía firmemente en la eficacia de los métodos de conversación, negociación, conciliación y transacción no sólo como principios, sino como medidas prácticas, y era partidaria de que se señalaran a la atención de lo que se había llamado con razón la "conciencia mundial", los problemas concretos, a fin de ejercer la necesaria presión moral sobre las partes que se mostrasen renuentes. Su delegación tenía grandes esperanzas en la función que pudiera representar el Secretario General para facilitar la solución de los problemas que surgiesen como consecuencia de las situaciones coloniales. Asimismo, esperaba que el Comité Especial no se aferrase a viejas fórmulas que eran

aplicables a los casos normales de descolonización, pero que tal vez fueran menos válidas en los casos especiales que figuraban en el programa.

59. Las tres cuestiones que habían de tenerse en cuenta al organizar los trabajos del Comité eran el programa, el orden de prioridades y los métodos de trabajo.

60. Respecto del programa, las resoluciones sobre descolonización aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo periodo de sesiones daban una idea muy clara del trabajo que había de llevar a cabo el Comité. Los documentos preparados por la Secretaría (A/AC.109/L.260 y L.261) eran también útiles y el orador sugirió que el documento A/AC.109/L.261 se considerara como programa provisional para 1966.

61. En cuanto al orden de prioridades, la delegación de Italia estimaba que todos los problemas coloniales eran urgentes y estaba dispuesta a aceptar cualquier recomendación que fuese aceptable para la mayoría de los miembros. Confiaba en que el Comité diera la prioridad debida al problema de los llamados territorios pequeños, que era particularmente complejo y requería atención especial.

62. Con respecto a los métodos de trabajo, el Comité había de tomar una posición preliminar acerca de varias cuestiones importantes. La primera era decidir si en las semanas próximas y en su informe a la Asamblea General el Comité debía estudiar todos los territorios enumerados en el documento A/AC.109/L.261 o sólo algunos de ellos. La delegación italiana era partidaria de que se estudiaran todos; sin embargo, cualquiera que fuere la norma elegida, era esencial atenerse a ella y no cambiarla luego a la mitad del periodo de sesiones.

63. La segunda cuestión era si en las resoluciones debían tomarse como base los debates celebrados en las sesiones plenarias o las discusiones de subcomité y los informes presentados al Comité plenario. El orador se mostró partidario del método de discusión en subcomité, que ya había resultado utilísimo en la preparación de gran parte del informe del Comité para 1965.

64. Por último, la cuestión del calendario era más urgente de lo habitual, en vista de las disposiciones de la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General sobre el programa de conferencias.

65. La delegación de Italia comprendía las razones que habían impulsado a cuatro Estados Miembros a invitar al Comité a que celebrara parte de su periodo de sesiones de 1966 en sus capitales respectivas, pero creía que sólo se podría tomar una decisión sobre ese asunto después de estudiar cuidadosamente los problemas de organización que había señalado. Se podría remitir la consideración preliminar de esos problemas, igual que en ocasiones anteriores, a un grupo de trabajo ampliado compuesto por la Mesa del Comité y otros cuatro miembros, pero sería necesario conocer la opinión del mayor número posible de miembros del Comité antes de convocar el grupo de trabajo.

66. El representante de Yugoslavia dijo que los problemas que consideraba el Comité eran tan difíciles como siempre. Algunas Potencias coloniales, apoyadas por otras con intereses idénticos, estaban haciendo cuanto les era posible para retener su influencia en los territorios bajo administración colonial, reprimir los movimientos de liberación nacional y detener toda evolución progresiva de amplio alcance. Esa situación constituía

un evidente peligro para la paz y la seguridad, conforme había reconocido la gran mayoría de los representantes que habían hecho uso de la palabra en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General.

67. El período de sesiones celebrado por el Comité en Africa en 1965 había sido de gran utilidad. Esas visitas y los contactos con peticionarios habían permitido que los miembros del Comité estudiaran la situación de ciertos territorios, la actitud de las Potencias administradoras hacia los problemas de los mismos y la medida en que se habían cumplido las disposiciones de ciertas resoluciones. La celebración de otro período de sesiones del Comité Especial en Africa respondería al espíritu de la resolución 2011 (XX) de la Asamblea General, relativa a la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, y la delegación yugoslava esperaba que esa cooperación llegara a ser una característica constante de las actividades del Comité.

68. El orador confiaba en que, al preparar el programa del Comité, el Grupo de Trabajo tendría en cuenta el problema de la participación de capital extranjero en la economía de los territorios coloniales, que estaba estrechamente ligado al retraso del proceso de descolonización.

69. Los problemas de los llamados territorios pequeños también eran importantes; contribuiría a la solución de los mismos el envío de misiones visitadoras del Comité Especial a esos territorios.

70. La delegación de Yugoslavia consideraba que los problemas del colonialismo y de la paz eran interdependientes. Estaba dispuesta a apoyar toda medida que garantizara una acción más rápida y más eficaz del Comité para acelerar el proceso de descolonización y la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

71. El representante de la India declaró que al preparar el programa de trabajo debía tenerse presente que el Comité empezaba su período de sesiones con tres o cuatro semanas de retraso respecto de años anteriores. Sin embargo, a pesar del escaso tiempo disponible, el Comité debía seguir las instrucciones específicas de la Asamblea General de que se celebraran debates sobre los distintos territorios y se le presentara un informe en su vigésimo primer período de sesiones.

72. Esperaba que en la sesión siguiente o un poco más tarde se anunciaría la constitución de un grupo de trabajo para que examinase el programa del Comité. El grupo de trabajo podría planear qué territorios deberían estudiarse durante los tres meses próximos y hacer recomendaciones acerca de una posible visita al Africa, que requeriría considerables preparativos. La delegación de la India había considerado siempre muy útil que el Comité hiciera visitas al Africa porque éstas daban a los miembros un cuadro más real de la situación reinante en los territorios.

73. Era preciso que el Subcomité de Peticiones se estableciera pronto y que empezara a funcionar cuanto antes, pues había varias peticiones en espera de decisión. Asimismo, el Comité debía decidir si habían de reconstituirse los tres Subcomités de los territorios pequeños del Caribe y el Océano Atlántico, del Océano Indico y del Océano Pacífico, o si debía modificarse su composición.

74. Por último, había también algunas cuestiones importantes acerca del informe del Comité a la Asam-

blea General. En otras ocasiones los informes del Comité habían llegado a tener casi 2000 páginas y nadie o casi nadie había podido leerlos en su integridad. En vista de los problemas financieros y del enorme trabajo que suponía la preparación y la traducción de informes tan voluminosos, el orador esperaba que el Comité estudiara en las primeras semanas del período de sesiones qué medidas cabría adoptar para reducir su extensión, respetando sin embargo el derecho de cada delegación de dar a conocer sus puntos de vista.

75. El representante del Reino Unido dijo que en sus cuatro años de trabajo el Comité Especial había terminado prácticamente el examen de los territorios coloniales incluidos en su programa, y que la Asamblea General había aprobado gran número de resoluciones con arreglo a las recomendaciones del Comité. Su Gobierno había apoyado sinceramente algunos puntos de esas resoluciones, había aceptado en parte otros y había encontrado algunos inaceptables. Los desacuerdos producidos en el seno del Comité se habían referido sobre todo a los métodos, ya que en la mayoría de los casos se había manifestado acuerdo general en cuanto a los objetivos. Se había sugerido que el Comité concentrara sus esfuerzos en velar porque se aplicaran las disposiciones de todas las resoluciones de la Asamblea. El orador no creía que éste fuera por fuerza el enfoque más acertado o el único. Sería más provechoso examinar con cuidado los problemas prácticos de los distintos territorios, y los medios de resolverlos. Ello requería un trabajo constante y detallado, no necesariamente por resolución, sino, quizás, más por consenso. Las dificultades y las características especiales de cada territorio debían examinarse con más profundidad y tal vez con más objetividad que durante el primer examen general.

76. El Gobierno del Reino Unido era responsable de la administración de los Territorios británicos y de su evolución hacia la autonomía y la libre determinación plenas, pero reconocía enteramente el interés de la comunidad internacional en esas materias y había cooperado siempre con gusto en los trabajos del Comité. Esa cooperación continuaría en el futuro, porque los objetivos del Reino Unido eran los mismos que a menudo había apoyado el Comité, es decir, la libre determinación, la descolonización más rápida posible y la ayuda urgente a los pueblos coloniales con objeto de que pudieran ocupar el puesto que les correspondía en el mundo moderno, con el estatuto que ellos mismos hubieran elegido y aceptado libremente.

77. Sin embargo, para llevar a cabo un estudio más auténticamente objetivo, el Comité tendría que ir más allá de esos fines y hacer frente al problema real y variado de los territorios que aún eran colonias. La política del Gobierno del Reino Unido en los territorios que administraba tenía naturalmente por objeto ayudar a la población a resolver sus problemas, que iban desde las divisiones y suspicacias raciales en algunos lugares, hasta el atraso económico o la falta de sentimiento de unidad y de conciencia nacional en otros. Su delegación estaba dispuesta a facilitar al Comité información acerca de esa política y acogería con agrado toda propuesta constructiva del Comité. El Representante Permanente del Reino Unido y Ministro de Estado en Nueva York estaba dispuesto a tomar parte en conversaciones oficiosas sobre problemas o propuestas; además, el Secretario de Colonias en Londres estaba dispuesto a examinar cualquier su-

gestión de que los representantes del Comité visitasen Londres para discutir los casos de particular importancia o complejidad.

78. La contribución que podía aportar el Reino Unido sería más eficaz si se reajustaran los métodos de trabajo del Comité. En primer lugar, a la luz de la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General y de las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto⁸, el Comité debía formular en la semana o dos semanas próximas un programa detallado para el año entero, fijando ya una fecha para el debate sobre cada territorio o cuestión. De ese modo quizás se perdería algo de flexibilidad, pero esa pérdida quedaría compensada con creces por la mejor organización de los trabajos. Las Potencias administradoras, entre ellas el Reino Unido, podrían entonces prepararse más eficazmente para los debates sobre sus propios territorios y transmitir al Comité más información y, cuando fuera oportuno, facilitar especialistas y expertos propios o, posiblemente, de los territorios examinados.

79. Un segundo aspecto de esa colaboración más constructiva sería el incremento de las consultas entre el Grupo de Trabajo y la Potencia administradora interesada. La delegación del Reino Unido no tenía duda alguna en cuanto a la gran utilidad del Grupo de Trabajo y era partidaria de que continuara en funciones.

80. Asimismo, la preparación y redacción de informes y proyectos de resolución podría basarse en una representación más amplia de puntos de vista del Comité, teniendo más en cuenta las opiniones de las Potencias administradoras; en ese caso los trabajos del Comité serían más fecundos y más objetivos y, por ello, de mayor valor auténtico para la población de los territorios coloniales. Los deseos y opiniones de los pueblos coloniales, públicamente expresados por conducto de sus dirigentes y representantes elegidos democráticamente, podrían reflejarse con mayor amplitud en los informes y recomendaciones del Comité. Con frecuencia, las resoluciones sólo recogían el punto de vista de la mayoría; sería más útil que el Comité tratara de alcanzar un consenso equilibrado o preparara informes que cubrieran adecuadamente todos los puntos de vista, incluso en los casos en que estuvieran en conflicto.

81. El empleo de grupos pequeños o de subcomités del Comité para examinar los problemas de determinados territorios o regiones tenía ventajas evidentes; los grupos pequeños podían estudiar los problemas con mayor profundidad y quizá de modo menos formal. Ahora bien, en períodos de sesiones anteriores se habían echado a perder algunas de las ventajas de este método al celebrar después debates completos sobre las mismas cuestiones en sesión plenaria del Comité. A fin de evitar duplicaciones, el Comité podría abstenerse, siempre que fuese oportuno, de celebrar un debate completo sobre los informes de los grupos pequeños, e incluirlos en cambio en su informe a la Asamblea General sin que ello significara necesariamente que los apoyase o aprobase.

82. El orador agradeció a los cuatro Gobiernos africanos la invitación que habían dirigido al Comité, pero todo cuanto había dicho acerca de las ventajas

de los grupos pequeños y de la poca conveniencia de que el Comité celebrase debates amplios en sesión plenaria se aplicaba aún con mayor fuerza a la sugestión de otra visita a África. La visita de 1965 había dado ya al Comité una mejor idea de los problemas y personalidades de África; una segunda visita no facilitaría los estudios objetivos que el orador sugería, y el Comité contaba con muy poco tiempo antes del período de sesiones de la Asamblea General para preparar su informe. Un viaje complicado y costoso por varios países africanos sólo podía justificarse si acarrase ventajas muy considerables y tangibles, imposibles de alcanzar por otro medio. No creía que esta justificación existiera en el caso actual y, por consiguiente, consideraba un segundo viaje del Comité entero a África como una pérdida de tiempo y de dinero.

83. Consideró útil para el Comité disponer de información acerca del programa del Gobierno del Reino Unido para favorecer la evolución constitucional y la descolonización en los restantes territorios coloniales. Habló primero de los cuatro territorios que habían iniciado su camino, ya trazado, hacia la independencia. La Guayana Británica iba a ser declarada independiente el 26 de mayo, Bechuania el 30 de septiembre y Basutolandia, previa presentación de una solicitud formal de acuerdo con el procedimiento establecido, algo más tarde en 1966. En la Conferencia sobre la Isla Mauricio, celebrada en septiembre de 1965, se había decidido que el Gobierno del Reino Unido estaría dispuesto a tomar las medidas necesarias para declarar independiente ese Territorio si así lo solicitaba la nueva Asamblea Legislativa. Habría un período de seis meses de gobierno interno propio luego de las elecciones que tendrían lugar después de que se hubiera tratado el informe de la Comisión Electoral.

84. Además, se habían enviado recientemente invitaciones a los partidos representados en la Asamblea Legislativa de Barbada con objeto de que asistieran a una conferencia, en Londres en julio de 1966, para discutir la petición de su Gobierno de que se concediese pronto la independencia al Territorio. Se habían presentado y hecho públicas nuevas propuestas de modificaciones constitucionales relativas a los territorios caribes de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente, y en la primavera de 1966 se iban a celebrar en Londres conferencias sobre esas cuestiones.

85. Como sabía el Comité, la Arabia Meridional lograría la independencia en 1968. Entre los últimos acontecimientos de interés para ese Territorio figuraba la publicación del informe de los asesores en asuntos constitucionales, encargados por el Gobierno Federal de redactar propuestas para una constitución que se aplicaría a todo el Territorio de la Arabia Meridional. En segundo lugar estaba el anuncio hecho por el Gobierno del Reino Unido de que, como parte de la reforma general de su sistema de defensa, tenía la intención de retirar sus fuerzas de la base de Adén cuando la Arabia Meridional fuese independiente. En tercer lugar se había de citar la decisión del Gobierno Federal de recomendar que se anularan todas las ordenanzas en cuya virtud se obligaba, por razones políticas, a vivir fuera del país a personas de la Arabia Meridional, con objeto de que esas personas pudieran volver al país. El Gobierno del Reino Unido esperaba que todos esos acontecimientos fomentasen las consultas entre todos los sectores de opinión de

⁸ *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/6130, párr. 6.

la Arabia Meridional, a fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas constitucionales necesarias para la independencia.

86. Los Territorios a que se refería comprendían casi 5 millones de los 9.500.000 habitantes de todos los territorios dependientes del Reino Unido, sin incluir a Rhodesia.

87. En los territorios restantes la evolución constitucional continuaba en casi todos los casos a un ritmo acelerado. En su mayor parte eran territorios de poca superficie y población y era imposible generalizar sus problemas y necesidades. Esos problemas, variados y diferentes en cada caso, eran los que el Gobierno del Reino Unido, en colaboración con las poblaciones de los territorios, estaba tratando de resolver en las últimas fases del gran movimiento histórico hacia la descolonización. En las Islas Seychelles se había nombrado a un Comisionado en Asuntos Constitucionales para que asesorara acerca de los futuros progresos en esa esfera, y ya había dado comienzo a sus trabajos. En Swazilandia la Comisión Constitucional había estado examinando las próximas fases del progreso constitucional y se esperaba que, más avanzado 1966, se tomaran decisiones finales en cuanto a la forma de una constitución para la autonomía interna. La próxima etapa del desarrollo constitucional de las Islas Gilbert y Ellice estaba ahora en estudio. En las Bermudas, el comité mixto compuesto por miembros de las dos cámaras del poder legislativo, al que se había encomendado el examen de los cambios constitucionales, había recomendado, entre otras cosas, que el límite de edad para votar se redujera de 25 a 21 años y que se suprimiera el segundo voto de que disfrutaban antes algunos habitantes de las Bermudas según los bienes que tenían. Se habían puesto en práctica esas recomendaciones y ahora se aplicaba en las Bermudas el sistema electoral de un voto por persona.

88. Además, en un futuro próximo se adoptarían medidas para promover la evolución constitucional en las Islas Viti, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, las Islas Caimán, las Islas Falkland y las Islas Salomón.

89. Por último, había algunos territorios respecto de los cuales otros países habían presentado reclamaciones territoriales. En el caso de Gibraltar el Gobierno del Reino Unido había convenido con el Gobierno de España en que, en aplicación de la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General, se celebrarían en Londres conversaciones entre ambos Gobiernos. El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, con participación del Primer Ministro de la Guayana Británica, habían discutido en Londres y en Ginebra la cuestión de la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. El orador estaba seguro de que el acuerdo alcanzado, firmado en Ginebra en febrero, sería bien acogido por el Comité.

90. En cuanto a las Islas Falkland, el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la Argentina habían comunicado a las Naciones Unidas el acuerdo a que llegaron el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, conforme al cual continuarían sin retraso las conversaciones según había recomendado la Asamblea General en su resolución 2065 (XX), a fin de llegar a una solución pacífica.

91. Este considerable programa de descolonización y evolución constitucional para 1966 mostraba que el Gobierno del Reino Unido estaba haciendo todo lo posible para ayudar a los pueblos de sus territorios coloniales a alcanzar los objetivos que deseaban todos los miembros. El orador confió en que se discutirían plenamente las sugerencias de su delegación tendientes a hacer más eficaz la labor del Comité.

92. El representante de la República Unida de Tanzania recordó que cuando el Comité estuvo en Addis Abeba el año pasado se había formulado la sugerencia de que el Consejo de Seguridad se reuniese en Africa para analizar algunos de los graves problemas del colonialismo, tales como los de los Territorios portugueses. Su delegación estimaba que una reunión en Africa de un órgano como el Consejo de Seguridad sería sumamente útil, pues para muchos africanos el colonialismo portugués constituía una amenaza a la paz y la seguridad del continente, como el mismo Consejo de Seguridad había señalado una vez. En consecuencia, confiaba en que el Comité haría todo lo posible por convertir dicha sugerencia en realidad.

93. Estimó que el Comité debía recurrir más a subcomités, como el año pasado. Habría que reconstituir los subcomités que creó entonces, dejando que los miembros de la Mesa del Comité decidieran su composición. Sin embargo, se podría suprimir el Subcomité de la Guayana Británica, ya que ese Territorio había de independizarse en el curso del presente año. Se podría sustituir por un subcomité que se ocupase de las islas pequeñas cuya situación había de examinarse en el actual período de sesiones. Una vez que se reconstituyesen los subcomités, podrían elaborar sus programas de trabajo y someterlos a la aprobación del Comité. Este podría así preparar un programa de trabajo para todo el año.

94. En lo relativo a la visita a Africa, siempre había estimado que el mejor lugar de reunión para el Comité era el más cercano a las regiones donde aún existía el colonialismo. Como por desgracia todavía había colonias en Africa, la delegación de Tanzania consideraba necesario que el Comité se reuniera en ese continente. Creía que la experiencia adquirida por el Comité en Africa el año pasado justificaba suficientemente otra visita. Si se aceptaba la idea de celebrar un período de sesiones en Africa, mientras el Comité estuviera allí podría abordar todos los problemas relativos a ese continente. El orador confiaba en que la decisión se adoptaría pronto, a fin de que los países huéspedes tuvieran tiempo de hacer preparativos para la visita del Comité.

95. Si bien la delegación de Tanzania estimaba que la cuestión de los territorios pequeños debía examinarse en el actual período de sesiones, creía también que el Comité debía enviar un grupo de tres o cuatro miembros a tales lugares a fin de obtener más información. Al formular esta sugerencia, no subestimaba los informes de las Potencias administradoras; pensaba sólo que un informe de un grupo pequeño complementaría la información presentada por dichas Potencias.

96. En cuanto a las cuestiones de Adén y Omán, sugirió que sería útil que el Comité abordase dichos temas en El Cairo, donde tendría oportunidad de oír a peticionarios de esas regiones.

97. El representante de Siria dijo que, a pesar del optimismo que se había manifestado respecto al

inminente fin del colonialismo, había indicios de una actitud recalcitrante de ciertas Potencias coloniales y de una consolidación de las fuerzas reaccionarias para suprimir la identidad de determinados pueblos indígenas. En un lugar se sostenía que estaban en juego intereses estratégicos, afirmación que hacía depender de otros factores el cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; en otro, el colonialismo iba a desaparecer sólo de nombre quedando reemplazado por vínculos económicos. En el África Sudoccidental el mundo era testigo de una conquista gradual y deliberada, aunque encubierta, de un país africano por una minoría de colonos extranjeros.

98. El Comité tenía que dedicarse de lleno a estos problemas, con miras a contribuir a mitigar los sufrimientos de los pueblos subyugados. Animada de este espíritu, la delegación de Siria apoyaba resueltamente la sugerencia de que el Comité visitara las capitales de África que le habían extendido invitaciones. La experiencia enseñaba que las Potencias coloniales se mostraban a menudo reacias a dar un cuadro completo de la situación imperante en los territorios que administraban y ya era corriente que negaran la entrada a misiones visitadoras de las Naciones Unidas. Aunque el Comité no fuera otra cosa que portador del mensaje de que la mayoría de los pueblos seguían con profundo interés y apoyaban, moralmente por lo menos, la lucha legítima de los pueblos por la independencia, sus visitas servirían de mucho. Una pronta decisión del Comité al respecto no sólo se imponía por cortesía hacia los gobiernos invitantes, sino que además permitiría señalar un calendario de trabajo. Si se acordaba realizar tales visitas, lo lógico sería tratar en África las cuestiones de África; las cuestiones relativas a Adén y Omán podían estudiarse convenientemente en El Cairo, ciudad a la que los peticionarios podían llegar fácilmente. El Comité podría ocuparse de los demás puntos de su programa antes o después de la visita al África.

99. Podrían instituirse subcomités para evaluar la actual situación de determinados territorios; cuando se tratara de subcomités sobre cuestiones nuevas, como la de Omán, podrían hacer sugerencias sobre el método de trabajo.

100. No habría inconveniente alguno en que el Comité omitiera de su informe ciertas secciones que figuraban en informes previos, pero debía seguir ejerciendo las atribuciones que le había conferido la Asamblea General y tomar resoluciones claras e inequívocas. Si las resoluciones anteriores no se habían llevado a efecto, ello era por culpa de las Potencias coloniales y no por el lenguaje empleado en ellas. Si las Potencias coloniales hubieran dejado que las Naciones Unidas decidieran sobre lo que era justo y lo que estaba mal, el Comité habría dado cima a su trabajo hace mucho tiempo.

101. El representante de Malí declaró que en la organización de sus trabajos el Comité debía tener presentes las disposiciones de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General.

102. El Comité tenía que establecer, como en ocasiones anteriores, un grupo de trabajo que señalara un orden de prioridad a las diversas cuestiones sometidas a su estudio. El examen propiamente dicho de estas cuestiones habría de hacerse en el Comité, pero había de recordarse que había quedado superada ya la fase de la denuncia del colonialismo y que era preciso concentrar los esfuerzos en la formulación de medios

concretos para liquidarlo. Ya era hora de que se realizaran las esperanzas de millones de seres, que anhelaban verse libres de la dominación colonial. Los subcomités podrían estudiar más detenidamente determinados aspectos de la explotación colonial, en especial los aspectos económicos y militares relacionados con las operaciones de monopolios extranjeros y con el establecimiento y mantenimiento de bases militares. Los pequeños territorios, en particular, eran utilizados como bases de agresión, y la delegación de Malí apoyaba la sugerencia hecha por el representante de Tanzania en el sentido de enviar a esos territorios misiones visitadoras. Por esas razones económicas y militares, a esos territorios pequeños les resultaba difícil conseguir la independencia.

103. La delegación de Malí celebró la próxima independencia de Guayana y Bechuanía. El Comité debía estudiar la cuestión de los Territorios bajo dominación portuguesa y proponer un plazo para su independencia. El Comité debía proponer también que se retirara a Sudáfrica el Mandato del África Sudoccidental; la Corte Internacional de Justicia había de condenar sin duda la política de apartheid que seguía el Gobierno racista de Sudáfrica contra la población del África Sudoccidental, en violación del propio espíritu del Mandato.

104. El orador agradeció las amables invitaciones hechas al Comité Especial por los Gobiernos de Argelia, Etiopía, Somalia, la República Árabe Unida y la República Unida de Tanzania. La visita al África permitiría a los miembros del Comité apreciar el alcance de la lucha de liberación que libraban los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Adén y la Arabia meridional. El Comité obtendría información de los peticionarios y los pueblos interesados comprobarían que las Naciones Unidas comprendían sus problemas.

105. Los informes del Comité debían referirse solamente a los nuevos acontecimientos; por lo que a la historia respectaba, los miembros podían consultar los informes precedentes.

106. El representante de Polonia dijo que los métodos de trabajo del Comité debían reflejar los propósitos y objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las tareas y obligaciones específicas prescritas en la resolución 2105 (XX). En esta última resolución se pedía al Comité Especial que investigase los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la resolución 1514 (XV) a todos los Territorios que aún no habían logrado la independencia. El Comité debía, pues, idear nuevos métodos y nuevas maneras de abordar las cuestiones que figuraban en su programa, a fin de dar cumplimiento con éxito a todas las resoluciones adoptadas sobre determinados territorios. Debía examinar cómo cumplían las Potencias coloniales las decisiones tomadas por la Asamblea General; ciertas Potencias, en particular Sudáfrica y Portugal, seguían desafiando a las Naciones Unidas. La delegación de Polonia estaba de acuerdo en que el Comité recomendará que se retirase a Sudáfrica el Mandato de África Sudoccidental. Apoyaba pues la idea de que la Asamblea General celebrara un período extraordinario de sesiones tan pronto como la Corte Internacional de Justicia hubiera dado cima al examen de la cuestión. También estaba de acuerdo en que el Comité siguiera estudiando la idea de una reunión del Consejo de Seguridad en África

en la que se examinara la situación del África Sudoccidental, Rhodesia del Sur y las colonias portuguesas. El Comité se hallaba perfectamente autorizado para sugerir ese procedimiento, puesto que en el párrafo 13 de la resolución 2105 (XX) se le faculta para "que haga sugerencias que el Consejo pueda atender al estudiar las medidas que conviene adoptar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

107. También conforme a la resolución 2105 (XX), el Comité debía recomendar un plazo para que cada Territorio se independizara de acuerdo con los deseos de su población. Era evidente que las Potencias coloniales interesadas en mantener su autoridad en los territorios bajo su dominación recurrían a todo tipo de tácticas dilatorias.

108. Apoyó enteramente la idea de la visita a África y deseaba expresar su agradecimiento a los cinco Gobiernos que habían enviado invitaciones al Comité. Era igualmente importante el envío a ciertos Territorios de misiones visitadoras que se pusieran en contacto directo con la población, indagasen sus deseos y aspiraciones y determinasen cuál era la verdadera situación. No cabía esperar que las Potencias coloniales, que calificaban de actos de terrorismo la lucha popular legítima por la liberación, tuvieran en cuenta la manera de pensar de los pueblos oprimidos. Era de esperar que las Potencias administradoras renunciasen a su actitud de negar la entrada de representantes del Comité Especial en sus Territorios.

109. El Comité debía seguir su práctica acostumbrada de nombrar subcomités. Las ventajas pesaban más que los inconvenientes de esa práctica; sobre todo, se ganaba tiempo y se facilitaba la labor del Comité.

110. En cuanto a los informes del Comité, era lógico que en lo sucesivo se prescindiera de los antecedentes históricos que ya figuraban en informes previos.

111. El representante de Sierra Leona declaró que, con arreglo a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, el Comité había de informar a ésta en el vigésimo primer período de sesiones sobre los territorios que figurasen en su programa; respecto de algunos de los territorios, en especial los pequeños, el Comité había de estudiar nuevas maneras de solventar problemas peculiares; por último, había de sugerir plazos para la independencia de algunos Territorios.

112. Confiaba en que el Comité visitaría al África, pues creía que las ventajas que podían resultar de tal visita tendrían más peso que cualquier otra consideración. Era deber del Comité no omitir esfuerzo alguno para liberar a los territorios de ese continente que estaban convirtiéndose en casos "crónicos" de colonialismo. Se debía instituir lo antes posible el grupo de trabajo, el cual debería iniciar sus funciones considerando si debía hacerse o no dicha visita al África. Durante esta visita habría que estudiar problemas tales como los de Rhodesia del Sur, los territorios portugueses, el África Sudoccidental, Adén y la Federación de Arabia Meridional.

113. Al organizar su programa, el Comité debía tener en cuenta el tiempo y los recursos de que disponía. Sin embargo, las consideraciones de tipo económico no debían oscurecer el primordial objetivo de asegurar que todos los territorios que aún estaban bajo la dominación colonial obtuvieran la independencia. El tiempo que faltaba para la visita a África podría

emplearse en estudiar los territorios restantes del programa y en crear los subcomités. Además, podría prepararse más documentación informativa para la visita al África.

114. El representante del Reino Unido había mencionado la posibilidad de que representantes del Comité hicieran una visita a Londres. Pero era lamentable que el Reino Unido no permitiese el envío de misiones visitadoras a los territorios. Esa actitud suscitaba dudas acerca de la sinceridad del Reino Unido. La visita de una misión a cada uno de los Territorios que figuraban en el programa, sobre todo a las islas menores, permitiría entablar el mismo tipo de contacto directo que se obtuvo durante la visita anterior del Comité al África.

115. La tarea de la Secretaría se facilitaría si de los futuros informes del Comité se omitiesen todos los antecedentes.

116. El representante de Bulgaria manifestó que la declaración hecha por el Secretario General al inaugurarse el período de sesiones (véanse los párrs. 14 a 23) había aportado directivas a la labor del Comité, a la luz de los debates sostenidos en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General y en las reuniones del Comité Especial. Como indicara el Secretario General, los problemas principales en materia de descolonización seguían sin avanzar hacia una solución pacífica y la mayoría de las delegaciones habían expresado honda preocupación por el continuo retraso en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia.

117. Aunque la mayoría de las delegaciones coincidían en los métodos que debían seguirse y creían que el Comité debía esforzarse todo lo posible por conseguir que se aplicaran las resoluciones de la Asamblea General, algunas delegaciones habían expresado un parecer distinto. Por ejemplo, el representante del Reino Unido había dicho que el atender preferentemente a que se cumplieran las disposiciones de todas las resoluciones de la Asamblea no constituía por fuerza el enfoque más acertado o el único. Si la política del Gobierno del Reino Unido consistía en no aplicar las resoluciones de la Asamblea General, se comprendía que la opinión de la delegación del Reino Unido sobre el asunto de los métodos de trabajo del Comité difiriese de la opinión de la mayoría de las delegaciones. El representante del Reino Unido había declarado que su Gobierno era responsable de la administración de los Territorios británicos y de su evolución hacia el gobierno propio y la independencia. Ello no exoneraba, sin embargo, al Reino Unido de sus obligaciones, ya que afirmaba que no había desacuerdo sobre los objetivos generales.

118. Además, el representante del Reino Unido había sugerido que el Comité Especial no debía adoptar resoluciones, sino tratar de alcanzar un consenso, ya que las resoluciones sólo recogían el punto de vista de la mayoría, mientras que el consenso era el común denominador, es decir, lo máximo que podían conceder las Potencias coloniales. Era evidente por ello que las opiniones divergían mucho respecto de la política que las Naciones Unidas habían seguido hasta ahora en materia de descolonización.

119. Coincidió con la declaración del representante del Reino Unido de que el Comité había de organizar cuidadosamente su labor para no malgastar el dinero de las Naciones Unidas. Sin embargo, deseaba recalcar

que el Comité no debía buscar economías a costa de que pueblos enteros de Africa y otras partes del mundo siguieran padeciendo el yugo colonial. Por ello estimó que el Comité no debía permitir que el mero deseo de hacer unos ahorros le impidiera adoptar las iniciativas necesarias al organizar sus trabajos. El Comité debía seguir adelante con las propuestas hechas por diversas delegaciones para acelerar su labor respecto de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

120. Algunas delegaciones, sobre todo la del Reino Unido, se habían opuesto categóricamente a la propuesta de que el Comité celebrara reuniones en Africa. La última visita del Comité al Africa había sido de gran valor; durante dicha visita, quienes luchaban por la libertad, la independencia y la libre determinación en los territorios bajo administración portuguesa, en Rhodesia del Sur, en el Africa Sudoccidental y en otros territorios coloniales, habían podido comparecer ante el Comité y los miembros de éste, a su vez, habían podido vivir en la atmósfera en que los pueblos africanos libraban su desesperada lucha contra un poderoso enemigo a quien ayudaban todas las fuerzas imperialistas y reaccionarias del mundo. El contacto directo con los representantes de esos pueblos en lucha había influido positivamente en las decisiones anticoloniales que el Comité adoptara en Africa. No cabía duda de que era urgente que el Comité se reuniera de nuevo en Africa, ya que los acontecimientos de Rhodesia del Sur y de otras partes eran prueba de una nueva ofensiva de las fuerzas del imperialismo y del neocolonialismo. Un período de sesiones del Comité en Africa permitiría a las Naciones Unidas hacer sentir todo su peso en esta decisiva etapa de la lucha contra el colonialismo.

121. Algunas de las decisiones aprobadas en las Naciones Unidas no se habían llevado a la práctica eficazmente. De ahí que la delegación búlgara apoyara la idea de que el Consejo de Seguridad se reuniera en Africa. En momentos en que crecía la arrogancia de los racistas y colonialistas en su política agresiva frente a los pueblos oprimidos y los jóvenes Estados africanos, el órgano de las Naciones Unidas a quien incumbía la primordial responsabilidad de mantener la paz y la seguridad podría adoptar las decisiones necesarias *in situ* y oír a los representantes de los pueblos africanos que se hallaban en tan desesperada situación.

122. La delegación de Bulgaria sugirió, por tanto, que si el Comité no adoptaba una resolución sobre ese punto, el Presidente se pusiera en contacto con el Presidente del Consejo de Seguridad durante el año, con objeto de proponer que el Consejo hiciese una visita al Africa.

123. La situación reinante en el Africa Sudoccidental había sido siempre uno de los problemas más difíciles. Era bien sabido que el Gobierno racista de Verwoerd intentaba anexionarse el Territorio del Africa Sudoccidental. Ese Gobierno no había mostrado sino desprecio por las decisiones de las Naciones Unidas, Organización a quien incumbía primordialmente el porvenir del Africa Sudoccidental. El orador apoyó la idea de que la Asamblea General celebrase un período extraordinario de sesiones sobre la cuestión tan pronto como la Corte Internacional de Justicia hubiese hecho saber su decisión sobre la cuestión del Africa Sudoccidental. A Sudáfrica se le debía retirar el Mandato del Africa Sudoccidental.

124. Por supuesto, el Comité Especial debía dedicar especial atención a la cuestión de Adén y de la Península de Arabia Meridional, Omán y otros territorios coloniales. En ciertos círculos se había intentado recientemente privar a los pueblos de estas regiones de la posibilidad de intensificar su lucha por la independencia. El Comité Especial — y el Consejo de Seguridad, si acudía al Africa — debían hacer todo lo posible por ayudar a esos pueblos en sus esfuerzos de liberación.

125. No se debía dar a las Potencias coloniales la impresión de que el Comité se interesaba menos por los territorios coloniales llamados pequeños. En algunos de esos territorios se habían iniciado recientemente maniobras encaminadas a perpetuar la férula colonial bajo nuevos disfraces, y era preciso que el Comité se mantuviera alerta. Debían aplicarse escrupulosamente las resoluciones de la Asamblea General en los territorios del Caribe, del Atlántico y del Pacífico. Pensaba especialmente en la decisión de la Asamblea General de enviar misiones visitadoras a esos territorios, cuestión que había abordado el representante de Tanzania en su propuesta de que se efectuaran visitas a los territorios pequeños. Los Estados que administraban esos territorios habían de percatarse de que al recibir dichas misiones darían pruebas de su buena voluntad y de que reconocían los derechos de los pueblos de los territorios a la independencia y a la libre determinación.

126. Durante el pasado año el Comité Especial había dedicado gran atención al papel que desempeñaban los monopolios extranjeros en Africa. A base de los estudios hechos por el Comité y sus Subcomités, la Asamblea General había adoptado decisiones importantes sobre las consecuencias de las actividades de los monopolios extranjeros en el Africa Sudoccidental y en las colonias portuguesas. Convenía completar el estudio sobre el papel desempeñado por los monopolios en Rhodesia del Sur, y el Comité debía recomendar a la Asamblea que se adoptaran medidas prácticas contra la influencia nefasta de importantísimas entidades imperialistas y neocolonialistas en Africa.

127. Si las consideraciones que había expuesto se tenían en cuenta y se seguían las directivas indicadas en las resoluciones de la Asamblea General, en la declaración del Secretario General en la sesión de apertura y en las intervenciones de la mayoría de las delegaciones que habían hecho uso de la palabra, el Comité podría trabajar constructivamente para que el año actual fuese un año de cooperación en materia de descolonización.

128. El representante de Irak recordó que, en su declaración ante el Comité, el Secretario General había hablado del programa sumamente recargado que tenía el Comité. La magnitud de las obligaciones y responsabilidades del Comité contrastaba tajantemente, en verdad, con algunas de las ideas que se habían expresado acerca de su labor, sobre todo la sugerencia de que se restringieran sus deliberaciones.

129. Al Comité le había confiado la Asamblea General la tarea de ayudar a los pueblos que aún seguían sometidos a la férula y opresión coloniales en su lucha por la independencia y emancipación. Se le había encargado que no perdiese de vista las cuestiones de Adén, Rhodesia del Sur, Africa Sudoccidental, los Territorios bajo administración portuguesa, Omán y todos los demás territorios coloniales. Como el Comité estaba en sesión permanente, siempre estaría autorizado

a abordar cualquier asunto que surgiese en relación con resoluciones de las Naciones Unidas y con la negativa de las Potencias coloniales a aplicarlas. La pronta acción del Comité respecto de las medidas represivas recientemente adoptadas por las autoridades del Reino Unido contra el pueblo de Adén indicaba la importancia de su función, en la que debía tener cuidado de no abdicar sus derechos y deberes.

130. Por supuesto, el Comité debía organizar sus trabajos de manera que las delegaciones y los peticionarios pudiesen participar en ellos lo más plenamente posible, pero no debía adoptar normas rígidas ni fijar fechas inamovibles para el estudio de los temas. La delegación de Irak deseaba hacer varias sugerencias.

131. En primer lugar el Comité podría celebrar un debate general sobre las cuestiones que tenía a la vista e intentar evaluar los progresos realizados hasta ahora. Podría discutir los temas en detalle cuando se reuniera en África. El orador agradeció a los Gobiernos de Argelia, Somalia, la República Árabe Unida, Etiopía y Tanzania sus amables invitaciones, que era de esperar aceptase el Comité. Se mostró convencido de que un período de sesiones en África sería sumamente provechoso.

132. En segundo término el Comité debía estudiar atentamente la cuestión de fijar fechas inmediatas para la consecución de la independencia por varios territorios coloniales. Su país había subrayado la importancia de esta cuestión en la Segunda Conferencia de los Países no Alineados, celebrada en El Cairo, y le complacía ver que la idea estaba recibiendo creciente apoyo.

133. En tercer lugar el Comité debía estudiar los medios de dar a conocer su labor en el mundo entero, sobre todo en los territorios coloniales. Se podría pedir a los Servicios de Información Pública que estudiaran el asunto y presentasen un informe al Comité acerca de cómo se podría informar mejor al público de la situación de los pueblos que padecían el yugo colonial, y de los esfuerzos que realizaban el Comité y la Asamblea General.

134. Por último, su delegación creía útil el sistema de subcomités y estaba dispuesta a seguir participando en éstos. Sin embargo, el Comité no debería delegar poderes en esos órganos auxiliares. Apoyó también la sugerencia de que se enviaran grupos visitantes a los territorios pequeños.

135. El representante del Irán manifestó que, al discutirse la organización de sus trabajos, el Comité debía tener presentes determinados factores fundamentales.

136. En primer lugar el Comité debía organizar su labor de manera que se acelerase lo más posible la consecución de los objetivos fijados por la Asamblea General. Conseguiría más si dedicara la mayor parte del tiempo a acelerar el logro de la independencia a algunos de los territorios que si preparase un informe que abarcara a todos. Apoyó sin reservas la sugerencia del representante de Tanzania de que convenía estudiar con mayor detalle la cuestión de los territorios pequeños. El Comité podría enviar subcomités a esas zonas o reunir información por otros medios para complementar los datos aportados por las Potencias administradoras. Podrá así adoptar las medidas pertinentes en relación con esos territorios.

137. En segundo lugar no había que olvidar que el Comité tenía un programa recargado y disponía relativamente de poco tiempo. Cinco Estados Miembros lo habían invitado a celebrar sesiones en África. El orador agradeció a esos países sus amables invitaciones y se mostró decidido partidario de que se celebrara una reunión en África. Al organizar sus trabajos, el Comité había de decidir ante todo si iba a celebrar esas sesiones en África y, en caso afirmativo, durante cuánto tiempo. También había de determinar qué cuestiones debía abordar en sus reuniones de África, para poder entre tanto examinar otros temas.

138. En tercer lugar su delegación coincidía plenamente con la opinión expresada por los representantes de Italia y Tanzania, de que convenía utilizar más el sistema de subcomités. Se debían revisar los actuales subcomités, pues podría prescindirse de algunos y, en cambio, se necesitarían quizá otros nuevos. Al fijar la composición de los subcomités había que cuidar de la adecuada representación geográfica y velar porque cada miembro tuviera igual oportunidad de actuar en los diversos órganos.

Decisiones

139. El Comité Especial, en su 399a. sesión, al terminar el debate sobre organización de los trabajos, solicitó del Grupo de Trabajo un estudio y recomendaciones referentes a un programa de trabajo del Comité para el año actual, habida cuenta de las dos notas del Secretario General (A/AC.109/L.260 y L.261), y de las invitaciones extendidas al Comité por los Gobiernos de la República Unida de Tanzania (A/AC.109/147), la República Árabe Unida (A/AC.109/148), Etiopía (A/AC.109/149), Somalia (A/AC.109/150) y Argelia (A/AC.109/152) para celebrar reuniones en sus respectivas capitales, así como de las opiniones expresadas por los miembros durante el debate.

140. Basándose en las recomendaciones que figuran en los 22º, 23º y 24º informes del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.265/Rev.1, L. 270 y L.275), el Comité Especial adoptó, en sus 400a. y 409a. sesiones, decisiones sobre su programa de trabajo para 1966, incluido el orden de prioridad para el examen de los temas que tenía ante sí. Dichas decisiones, con las modificaciones introducidas posteriormente en las 410a., 462a. y 471a. sesiones, se reflejan en la sección V del presente capítulo.

141. Además, el Comité Especial decidió celebrar una serie de reuniones en África y aceptar las invitaciones hechas por los cinco Gobiernos para celebrar reuniones en sus respectivas capitales a partir del 23 de mayo de 1966 en Dar es Salaam.

142. Decidió asimismo mantener los Subcomités I, II y III y les pidió que comenzaran su labor inmediatamente. El Comité Especial pidió a los Subcomités que, al margen de las atribuciones establecidas por las resoluciones 1514 (XV) y 2105 (XX), llevaran a cabo los trabajos concretos que se indicaban en las notas del Secretario General contenidas en los documentos A/AC.109/L.260 y L.261 sobre los temas cuyo estudio se les había encargado. Autorizó a los Subcomités para que presentaran recomendaciones sobre el envío de grupos visitantes a los territorios de que se ocupaban.

143. Además, en su 409a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1966, el Comité Especial decidió remitir al Subcomité I, para examen e informe, el tema relativo a las

actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en Rhodesia del Sur, y a la forma en que operan, conforme al párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución sobre Rhodesia del Sur aprobada en la 328a. sesión del Comité, el 22 de abril de 1965 (A/6000/Rev.1, cap. III, párr. 292).

D. REUNIONES DEL COMITÉ ESPECIAL, DE SU GRUPO DE TRABAJO Y DE LOS SUBCOMITÉS

Comité Especial

144. El Comité Especial celebró 90 sesiones durante 1966, distribuidas de la siguiente manera:

Primer período de sesiones: 394a. a 415a. sesiones, del 8 de marzo al 18 de mayo de 1966, en la Sede de las Naciones Unidas; 416a. a 427a. sesiones, del 23 al 31 de mayo de 1966, en Dar es Salaam; 428a. a 432a. sesiones, del 2 al 4 de junio de 1966, en Mogadiscio; 433a. a 439a. sesiones, del 6 al 9 de junio de 1966, en Addis Abeba; 440a. a 447a. sesiones, del 11 al 15 de junio de 1966, en El Cairo; 448a. a 455a. sesiones, del 17 al 22 de junio de 1966, en Argel.

Segundo período de sesiones: 456a. a 483a. sesiones, del 6 de julio al 30 de noviembre de 1966, en la Sede de las Naciones Unidas.

Grupo de Trabajo

145. En su 399a. sesión el Comité Especial designó a Etiopía y la India para que llenaran dos vacantes producidas en el Grupo de Trabajo al modificarse la composición de la Mesa. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo estuvo compuesto de los cuatro integrantes de la Mesa del Comité, a saber, el Sr. Gershon Collier (Sierra Leona), Presidente, el Sr. José Piñera (Chile) y el Sr. John Malecela (República Unida de Tanzania), vicepresidentes, y el Sr. Ala'uddin Aljubouri (Irak), Relator, y de los representantes de Bulgaria, Etiopía, la India e Italia.

146. Durante el período que abarca el presente informe, el Grupo de Trabajo celebró diez sesiones y presentó un informe en forma oral y cuatro informes por escrito⁹.

Subcomité de Peticiones

147. El Comité Especial decidió en su 399a. sesión que el Subcomité de Peticiones siguiera en funciones, con idéntica composición que en 1965, salvo que Siria sustituiría a Etiopía. Por lo tanto, el Subcomité de Peticiones estuvo integrado por los siguientes miembros:

Australia	Siria
India	Túnez
Madagascar	Venezuela
Polonia	

148. El Subcomité de Peticiones celebró 23 sesiones y presentó 23 informes al Comité Especial¹⁰. El Subcomité de Peticiones examinó durante dicho período 243 comunicaciones, entre ellas 58 solicitudes de audiencia. Las peticiones distribuidas por el Subcomité figu-

ran en los capítulos del presente informe relativos a los territorios correspondientes.

Subcomité I

149. En su 400a. sesión el Comité Especial decidió mantener el Subcomité I con la misma composición que en 1965. En consecuencia, el Subcomité I estuvo integrado por los siguientes miembros:

Dinamarca	Siria
Etiopía	Túnez
Malí	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
República Unida de Tanzania	Yugoslavia

150. En su 23a. sesión, celebrada el 27 de abril de 1966, el Subcomité I eligió Presidente al Sr. John Malecela (República Unida de Tanzania) y Relator al Sr. Rafic Jouejati (Siria).

151. El Subcomité I celebró diez sesiones y presentó al Comité Especial tres informes sobre los siguientes temas cuyo examen se le había encargado:

a) Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en Rhodesia del Sur, y forma en que operan (A/AC.109/L.332 y Add.1);

b) Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios bajo administración portuguesa (A/AC.109/L.334 y Add.1);

c) Isla Mauricio, Islas Seychelles y Santa Elena (A/AC.109/L.335).

152. En los capítulos III, V y XIV del presente informe se hallarán detalles sobre el examen de dichos informes por el Comité Especial.

Subcomité II

153. En su 400a. sesión el Comité Especial decidió mantener el Subcomité II con la misma composición que en 1965, salvo que Afganistán sustituiría a Camboya. En consecuencia, el Subcomité II estuvo integrado por los siguientes países:

Afganistán	India
Australia	Irak
Chile	Polonia
Estados Unidos de América	Sierra Leona

154. En su 42a. sesión, celebrada el 28 de abril de 1966, el Subcomité II eligió Presidente al Sr. Kadhim Khalaf (Irak) y Relator al Sr. C. R. Gharekhan (India).

155. El Subcomité II celebró catorce sesiones y presentó seis informes sobre los siguientes temas cuyo examen se le había encargado:

a) Cuestión de las misiones visitadoras a los territorios de que se ocupa el Subcomité (A/AC.109/L.318);

b) Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón (A/AC.109/L.318/Add.1);

c) Niue e Islas Tokelau (A/AC.109/L.318/Add.2);

d) Nuevas Hébridas (A/AC.109/L.318/Add.3);

⁹ A/AC.109/L.265/Rev.1, L.270, L.275 y L.338. El informe oral presentado por el Presidente figura en el acta A/AC.109/SR.462.

¹⁰ A/AC.109/L.259, L.262, L.267, L.278, L.291, L.292, L.298, L.299, L.301, L.304, L.307, L.308, L.310, L.311, L.312, L.317, L.324 y Corr.1, L.328, L.331, L.336, L.340, L.349 y L.354.

e) Samoa Americana, Guam y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico (A/AC.109/L.318/Add.4);

f) Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, e Islas Cocos (Keeling) (A/AC.109/L.318/Add.5).

156. En los capítulos XV a XIX del presente informe figuran detalles del examen por el Comité Especial de los informes del Subcomité sobre cada Territorio y en la sección F del presente capítulo figura la cuestión del envío de misiones visitadoras.

Subcomité III

157. En su 400a. sesión el Comité Especial decidió mantener el Subcomité III con la misma composición que en 1965. En consecuencia, el Subcomité III estuvo integrado por los siguientes países:

Bulgaria	Madagascar
Costa de Marfil	Uruguay
Irán	Venezuela
Italia	

158. En su 42a. sesión, celebrada el 5 de mayo de 1966, el Subcomité eligió Presidente al Sr. Leonardo Díaz González (Venezuela) y Relator al Sr. Mohsen Sadigh Esfandiary (Irán). A partir del 9 de agosto y a raíz de la marcha de Nueva York del Sr. Díaz González, el Sr. Esfandiary actuó como Presidente.

159. El Subcomité III celebró diecinueve sesiones y presentó al Comité Especial un informe en forma oral y otro por escrito durante el período que se examina.

160. El informe del Subcomité III, presentado oralmente por su Relator al Comité Especial en la 413a. sesión, trataba del envío de misiones visitadoras a los territorios remitidos al Subcomité y posteriormente se incorporó a su informe presentado por escrito (A/AC.109/L.329 y Corr.1, párrs. 6 a 13). En la sección F del presente capítulo se reseña el examen de la cuestión por el Comité Especial.

161. El resto del informe del Subcomité (A/AC.109/L.329 y Add.1, párrs. 14 a 212) trataba de los siguientes temas que se le habían remitido para examen:

- a) Islas Vírgenes de los Estados Unidos;
- b) Islas Vírgenes Británicas, Barbada, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente;
- c) Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán;
- d) Islas Malvinas (Falkland Islands).

162. En el capítulo XXII del presente informe se reseña detalladamente el examen por el Comité Especial del informe del Subcomité sobre dichos Territorios.

Subcomité de Adén

163. En la 401a. sesión el Presidente del Comité Especial designó a Afganistán para que llenara la vacante creada en el Subcomité de Adén por la retirada de Camboya del Comité Especial. En consecuencia, el Subcomité de Adén quedó integrado por los siguientes países:

Afganistán	Venezuela
Costa de Marfil	Yugoslavia
Irak	

164. El 10 de mayo de 1966 el Subcomité de Adén eligió Presidente al Sr. Danilo Lekic (Yugoslavia).

165. El Subcomité de Adén celebró cinco sesiones y presentó un informe escrito y dos orales¹¹.

166. En el capítulo VI del presente informe se reseña el examen por el Comité Especial de los informes del Subcomité relativos a Adén.

Subcomité del Africa Sudoccidental

167. Por resolución aprobada en su 439a. sesión, celebrada en Addis Abeba el 9 de junio de 1966 (A/AC.109/177), el Comité Especial decidió crear el Subcomité del Africa Sudoccidental¹². En su 455a. sesión el Comité Especial, a propuesta del Presidente, decidió que el Subcomité del Africa Sudoccidental estaría compuesto por los siguientes miembros:

Costa de Marfil	Polonia
Dinamarca	Túnez
Etiopía	Venezuela
India	

168. El 21 de julio de 1966 el Subcomité eligió Presidente al Sr. Lij Endelkachew Maikonnen (Etiopía) y Relator al Sr. C. R. Gharekhan (India).

169. El Subcomité del Africa Sudoccidental celebró cuatro sesiones y presentó su informe (A/AC.109/L.325) al Comité Especial en la 467a. sesión, el 15 de septiembre. En el capítulo IV del presente informe se reseña detalladamente el examen del informe por el Comité Especial.

Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

170. Por resolución aprobada en la 439a. sesión, celebrada en Addis Abeba el 9 de junio de 1966 (A/AC.109/178), el Comité Especial decidió crear el Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia¹³. En la 455a. sesión el Comité Especial, a propuesta del Presidente, decidió que el Subcomité de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se compondría de los siguientes miembros:

Afganistán	Madagascar
Bulgaria	Malí
Irán	Uruguay
Italia	

171. El 27 de julio de 1966 el Subcomité eligió Presidente al Sr. Pedro P. Berro (Uruguay) y Relator al Sr. Matey Karasimeonov (Bulgaria).

172. El Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia celebró seis sesiones y presentó su informe (A/AC.109/L.326) al Comité Especial en la 466a. sesión, celebrada el 14 de septiembre. En el capítulo VII del presente informe se hallarán detalles del examen del informe por el Comité Especial.

Subcomité de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni)

173. Por resolución aprobada en su 454a. sesión, celebrada en Argel el 21 de junio de 1966 (A/AC.109/

¹¹ A/AC.109/L.289. Los informes orales presentados por el Presidente constan en las actas A/AC.109/SR.414 y SR.462.

¹² Véanse más detalles en el capítulo IV.

¹³ Véanse más detalles en el capítulo VII.

186), el Comité Especial decidió crear un Subcomité de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni).

174. En su 460a. sesión el Comité Especial decidió que el Subcomité de la Guinea Ecuatorial estaría compuesto por los siguientes miembros:

Chile	República Unida de
Dinamarca	Tanzania
Mali	Sierra Leona
Polonia	Siria

175. El Subcomité eligió Presidente al Sr. Gershon Collier (Sierra Leona) y Relator al Sr. Rafic Jouejati (Siria).

176. Entre el 17 y el 24 de agosto de 1966 el Subcomité visitó a Madrid y la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), donde celebró conversaciones con funcionarios del Gobierno español y con gran número de organismos, grupos y personas. Presentó su informe (A/AC.109/L.348) al Comité Especial en la 482a. sesión el 18 de noviembre. En el capítulo IX del

presente informe se reseña detalladamente el examen del informe por el Comité Especial.

Subcomité sobre las Islas Viti

177. Por resolución aprobada en su 463a. sesión, celebrada el 7 de septiembre de 1966 (A/AC.109/201), el Comité Especial decidió designar un Subcomité sobre las Islas Viti con el fin de estudiar directamente la situación en el Territorio e informar lo antes posible al Comité Especial.

178. En la 483a. sesión, el 30 de noviembre de 1966, el Presidente informó al Comité Especial que designaría el Subcomité al principio del próximo periodo de sesiones del Comité.

E. EXAMEN DE TERRITORIOS

179. Durante el periodo abarcado por este informe, el Comité Especial examinó los siguientes territorios:

<i>Territorios</i>	<i>Sesiones</i>
Africa Sudoccidental	395a., 396a., 398a. (Naciones Unidas, Sede) 417a., 418a., 420a. (Dar es Salaam) 433a. a 435a., 437a. a 439a. (Addis Abeba) 455a. (Argel) 460a., 465a. a 468a. (Naciones Unidas, Sede)
Adén	397a. a 401a., 413a., 414a. (Naciones Unidas, Sede) 431a. (Mogadiscio) 436a. (Addis Abeba) 441a. a 447a. (El Cairo) 462a., 473a. (Naciones Unidas, Sede)
Rhodesia del Sur	401a. a 407a., 410a. (Naciones Unidas, Sede) 418a., 419a., 423a. a 427a. (Dar es Salaam) 432a. (Mogadiscio) 447a. (El Cairo) 469a., 470a. (Naciones Unidas, Sede)
Islas Viti	410a., 412a., 413a., 461a. a 463a., 469a., 483a. (Naciones Unidas, Sede)
Territorios bajo administración portuguesa	418a. a 420a., 427a. (Dar es Salaam) 436a. (Addis Abeba) 450a. a 455a. (Argel) 470a., 474a., 475a. (Naciones Unidas, Sede)
Basutolandia, Bechuania y Swazilandia	421a. a 423a. (Dar es Salaam) 437a. a 439a. (Addis Abeba) 450a., 455a. (Argel) 456a. a 458a., 466a. a 468a. (Naciones Unidas, Sede)
Somalia Francesa	429a., 430a. (Mogadiscio) 438a. (Addis Abeba) 470a. a 472a., 475a. (Naciones Unidas, Sede)
Ifni y Sáhara Español	435a., 436a. (Addis Abeba) 472a. a 475a., ... (Naciones Unidas, Sede) 478a., 479a., 481a.
Omán	446a., 447a. (El Cairo) 480a., 482a. (Naciones Unidas, Sede)
Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni)	447a. (El Cairo) 451a., 452a., 454a. (Argel) 460a., 482a. (Naciones Unidas, Sede)
Gibraltar	464a., 475a., 480a. (Naciones Unidas, Sede) 482a.

<i>Territorios</i>	<i>Sesiones</i>
<i>Territorios remitidos al Subcomité I</i>	
Isla Mauricio, Islas Seychelles y Santa Elena ..	396a., 470a., 474a.
<i>Territorios remitidos al Subcomité II</i>	
Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón	468a., 473a.
Islas Niue e Islas Tokelau	468a., 473a.
Nuevas Hébridas	468a., 473a.
Samoa Americana, Guam y Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico	469a., 473a.
Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y Territorios en fideicomiso de Nueva Guinea, e Islas Cocos (Keeling)	469a., 473a.
<i>Territorios remitidos al Subcomité III</i>	
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	476a. a 478a., 482a.
Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Barbada, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente	463a., 476a. a 478a., 482a.
Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán	466a., 467a., 476a. a 478a., 482a.
Islas Malvinas (Falkland Islands)	476a. a 478a., 482a.

180. En los capítulos III a XIX y XXII del presente informe se reseñan detalladamente el examen de los territorios enumerados por el Comité Especial y sus conclusiones y recomendaciones al respecto.

181. El Comité Especial tomó nota de la proclamación de la independencia de Guyana (Guayana Británica) el 26 de mayo de 1966 (véase A/AC.109/SR.421).

182. Por falta de tiempo, el Subcomité II no pudo examinar Brunei y Hong Kong¹⁴. En los capítulos XX y XXI del presente informe se proporciona información relativa a estos dos territorios.

183. El Subcomité III no pudo examinar Honduras Británica por falta de tiempo. En el capítulo XXII del presente informe se hallará información sobre este Territorio.

F. ENVÍO DE MISIONES VISITADORAS A LOS TERRITORIOS

184. En el párrafo 7 de la resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea General apro-

¹⁴ Los representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bulgaria y Polonia manifestaron que, puesto que la cuestión de Hong Kong guardaba relación directa con la República Popular de China, las Naciones Unidas y sus órganos, incluido el Comité Especial, no podían examinar la cuestión hasta que se hubieran restablecido los derechos legítimos de la República Popular de China en las Naciones Unidas.

bó “el programa de trabajo previsto por el Comité Especial para 1966, en especial la posibilidad de organizar una serie de reuniones en Africa y de enviar misiones visitadoras a los territorios, sobre todo a las regiones del Atlántico, del Océano Indico y del Pacífico”.

185. Al aprobar el 22º informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.265/Rev.1), el Comité Especial, en su 400a. sesión, celebrada el 4 de abril de 1966, autorizó a los Subcomités I, II y III a presentar, según correspondiera, recomendaciones al Comité Especial relativas al envío de misiones visitadoras en relación con los territorios de que se ocupan.

Recomendación del Subcomité III

186. En su 413a. sesión el Comité Especial examinó un informe oral presentado por el Relator del Subcomité III acerca del envío de misiones visitadoras a los territorios que se le habían remitido. Las recomendaciones hechas al respecto por el Subcomité III, que se reproducen a continuación, así como las recomendaciones de los miembros del Subcomité, están incluidas en su informe (A/AC.109/L.329), que figura como anexo al capítulo XXII del presente informe. A continuación se resumen las declaraciones hechas por los miembros durante el examen del informe del Subcomité por el Comité Especial.

187. Al hacer el informe, el Sr. Mohsen Sadigh Esfandiary (Irán), Relator del Subcomité III, declaró

que, en su sesión del 5 de mayo de 1966, el Subcomité había autorizado a su Presidente para que se pusiera en contacto con los representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos con objeto de conocer sus puntos de vista acerca de la petición hecha por la Asamblea General en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 2069 (XX) sobre la cuestión de las misiones visitadoras.

188. La respuesta del representante del Reino Unido había sido que la cuestión de las misiones visitadoras planteaba a su Gobierno difíciles problemas de principio y que no podía decir nada que pudiera alentar al Subcomité a esperar cambio alguno en la actitud expresada anteriormente por su Gobierno. Su delegación estaría dispuesta a transmitir al Gobierno del Reino Unido cualquier sugestión o petición específica del Subcomité en relación con una visita a un territorio determinado, pero tal acción no podría interpretarse en el sentido de que implicara compromiso alguno de que el Gobierno del Reino Unido respondiese a dicha petición.

189. El representante de los Estados Unidos había dicho que no estaba en condiciones de dar una respuesta en términos generales a la cuestión de las misiones visitadoras. Cualquier propuesta específica del Subcomité para visitar un territorio del que los Estados Unidos fuesen responsables sería transmitida a su Gobierno, pero no podía alentar la idea de que su Gobierno cambiaría su posición.

190. Después de estudiar las respuestas, el Subcomité aprobó por consenso la siguiente recomendación:

"El Subcomité recomienda al Comité Especial que, de conformidad con la posición adoptada por la Asamblea General durante su vigésimo período de sesiones acerca de la cuestión de las misiones visitadoras, y expuesta en el párrafo 3 de la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965 y en las partes pertinentes del párrafo 7 de la resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, invite a las Potencias administradoras a que, en aquellos casos en que el Comité Especial decida enviar misiones visitadoras a cualquiera de los territorios que están siendo estudiados por el Subcomité III, hagan posible que las visitas de esas misiones se realicen y les ofrezcan su cooperación."

En calidad de Relator, recomendó que esta decisión fuese aprobada por el Comité Especial.

191. La representante de los Estados Unidos de América reservó la posición de su Gobierno respecto a la cuestión de las misiones visitadoras. Cualquier petición concreta relacionada con una misión visitadora sería transmitida por su delegación al Gobierno de los Estados Unidos, pero por el momento no podía alentar la idea de que fuese a cambiar la posición de su Gobierno al respecto.

192. El representante de Australia reservó la posición de su Gobierno sobre este asunto.

193. El representante del Reino Unido confirmó que la posición de su delegación ha sido expuesta con exactitud por el Relator del Subcomité III. Si el Comité decidía aprobar el informe del Subcomité, el orador deseaba reservar la posición de su Gobierno.

194. El representante de Bulgaria dijo que, con objeto de permitir que el Comité Especial se formara alguna idea de lo que estaba ocurriendo en los territorios

sometidos a estudio e hiciera recomendaciones a la Asamblea General durante su vigésimo primer período de sesiones, era esencial que se enviaran misiones visitadoras a esos territorios para obtener información directa de la población. En vista de las desalentadoras respuestas dadas por los representantes de los Estados Unidos y del Reino Unido, el Subcomité III había considerado necesario recomendar al Comité Especial que invitase a las Potencias administradoras a que hicieran posible que las visitas decididas por el Comité Especial se realizaran y que ofreciesen su cooperación a las misiones visitadoras. Indicó que la recomendación del Subcomité no añadía nada a lo que el Comité Especial y la Asamblea General habían pedido ya.

195. El representante de la India apoyó el informe provisional presentado por el Relator del Subcomité III.

196. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que, sobre la base de un estudio sumario, estimaba que el informe del Subcomité III estaba en completa conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su vigésimo período de sesiones y particularmente con las resoluciones 2069 (XX) y 2105 (XX). La Asamblea General había dado instrucciones específicas al Comité Especial a fin de que estudiara la cuestión de fijar fechas para la independencia de los territorios coloniales de acuerdo con los deseos de sus pueblos. Era esencial enviar misiones visitadoras a los territorios coloniales con objeto de determinar los puntos de vista de la población acerca del desarrollo futuro y de la condición jurídica que deseaban para sus territorios. La negativa de las Potencias coloniales a admitir misiones visitadoras, aun después de repetidas peticiones de la Asamblea General, debía considerarse como una negativa a cooperar con el Comité y con las Naciones Unidas. En consecuencia, el Comité debía aprobar el informe del Subcomité III y poner así de manifiesto la preocupación de sus miembros por las decisiones de la Asamblea General.

197. El representante de Malí apoyó el informe del Subcomité III y estaba seguro de que el Comité Especial lo aprobaría, especialmente porque incluía dos disposiciones importantes procedentes de resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su vigésimo período de sesiones. El envío de misiones visitadoras a los territorios pequeños, así como a otros territorios, facilitaría información al Comité Especial y a la Asamblea General que les permitiría adoptar medidas adecuadas encaminadas a que las Potencias administradoras, en cooperación con las Naciones Unidas, concediesen la independencia a los territorios coloniales.

198. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que su delegación apoyaba el informe del Subcomité III, que reflejaba las decisiones de la Asamblea General. La aprobación del informe del Subcomité daría a las Potencias coloniales una oportunidad de prestar al Comité la cooperación que siempre le habían prometido, permitiendo el acceso a los territorios de misiones visitadoras.

199. El representante de Italia recordó que en el curso del debate en el Subcomité III su delegación había expresado ciertas reservas, no ya sobre el principio de las misiones visitadoras, que apoyaba, sino acerca de la naturaleza del consenso obtenido. El Comité Especial no era sino un pequeño organismo y sus juicios no podían dar a las resoluciones de la Asamblea General mayor importancia ni más peso. Además, indicaba

poco sentido de la realidad el pedir a las Potencias administradoras que diesen una respuesta afirmativa a una pregunta hipotética: si aceptarían el envío de las misiones visitadoras que el Comité Especial decidiese enviar a los territorios que se encontraban bajo su administración.

200. El representante de Venezuela dijo que el Subcomité III no estaba simplemente reafirmando las resoluciones de la Asamblea General, sino que estaba haciendo una recomendación específica sobre la base de las disposiciones pertinentes de dos resoluciones de la Asamblea. No estaba pidiendo una respuesta a las Potencias administradoras; las estaba exhortando a que prestaran su apoyo y cooperación en caso de que el Comité Especial decidiese enviar misiones visitadoras a sus territorios. Venezuela apoyaba plenamente el consenso y el informe del Subcomité.

201. El representante de Siria declaró que su delegación apoyaba el informe. Ningún perjuicio se causaba poniendo de relieve resoluciones de la Asamblea General que todavía no habían sido aplicadas.

202. El representante del Irán dijo que en las actas del Subcomité se habían hecho constar las reservas de la delegación italiana. Se había llegado al consenso después de oír esas reservas y con el consentimiento del representante de Italia.

203. El representante del Uruguay recordó que los puntos de vista de su delegación habían sido expresados durante el debate en el Subcomité III. Suscribió las observaciones del representante de Venezuela y apoyó el consenso.

204. El representante de Túnez declaró que el informe no debía dar lugar a un debate prolongado; estaba basado en decisiones adoptadas durante el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Apoyó el informe y confió en que las Potencias administradoras prestarían su plena cooperación.

205. El representante de Sierra Leona expresó su sincero apoyo al informe. Sólo mediante misiones visitadoras podría el Comité Especial obtener un conocimiento directo de los problemas de los territorios coloniales y hallar una rápida solución para los mismos.

206. Los representantes de Etiopía y la Costa de Marfil expresaron su apoyo al informe del Subcomité.

207. El representante del Afganistán afirmó que su delegación apoyaba el informe. No se sentía desalentado por las reservas expresadas, particularmente por las delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos, y esperaba que, cuando les fuera pedido, las Potencias administradoras cooperarían con el Comité Especial en beneficio de las poblaciones de los territorios dependientes.

208. En la misma sesión el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité y la recomendación contenida en el mismo, quedando entendido que las reservas formuladas por los miembros se harían constar en el acta.

209. Por cartas de 17 de mayo de 1966 el Presidente, en nombre del Comité Especial, transmitió a los representantes permanentes de los Estados Unidos y del Reino Unido ante las Naciones Unidas el texto de la recomendación aprobada por el Comité Especial sobre el envío de misiones visitadoras a los territorios remitidos a ese Subcomité (A/AC.109/170).

210. Por carta de 23 de mayo de 1966, el representante permanente de los Estados Unidos acusó recibo de la carta del Presidente.

211. En una carta de 26 de mayo de 1966 (A/AC.109/171), el representante permanente adjunto del Reino Unido dio la siguiente respuesta:

"... La cuestión de las misiones visitadoras plantea difíciles problemas de principio al Gobierno del Reino Unido, razón por la cual me es imposible decir nada que pudiera inducir al Comité Especial a esperar cambio alguno en la actitud que mi Gobierno ha adoptado al respecto y que tan a menudo ha sido explicada al Comité Especial y a sus Subcomités. La delegación del Reino Unido estaría, como es natural, dispuesta a transmitir al Gobierno del Reino Unido cualquier sugestión o petición concreta que el Comité pudiera considerar pertinente formular sobre una visita a un determinado territorio y a tratar de obtener de él instrucciones al respecto. Sin embargo, esto no puede interpretarse en el sentido de que implique compromiso alguno de que el Gobierno del Reino Unido podría responder favorablemente a una petición de esa índole."

Recomendación del Subcomité II

212. En su 468a. sesión el Comité Especial examinó la sección del informe del Subcomité II relativa al envío de misiones visitadoras a los territorios cuyo estudio se le remitiera (A/AC.109/L.318), que se reproduce en el anexo II al presente capítulo. A continuación figuran los resúmenes de las declaraciones formuladas por los miembros durante el examen que hizo el Comité Especial del informe del Subcomité II relativo a esta cuestión.

213. Después de la presentación del informe por el Relator del Subcomité, el representante del Reino Unido formuló las reservas de su delegación sobre el envío de misiones visitadoras a los territorios administrados por el Reino Unido. La delegación británica había expuesto claramente su posición al respecto en el curso de las sesiones celebradas por el Subcomité y señaló a la atención de los miembros del Comité Especial las actas de esas sesiones. En cuanto a las misiones visitadoras, también recordó las observaciones formuladas por la delegación británica en el documento A/AC.109/171.

214. El representante de los Estados Unidos de América manifestó las reservas de su delegación en cuanto a la conveniencia de las misiones visitadoras.

215. El representante de Australia dijo que la posición de Australia en lo que respectaba a la organización de misiones visitadoras se había expuesto en el documento A/AC.109/L.318; deseaba subrayar que, si bien en ciertas circunstancias la organización de estas misiones podía ser muy recomendable, no parecía evidente su utilidad en cuanto a los territorios administrados por Australia, a los que el Consejo de Administración Fiduciaria había enviado ya muchas misiones. Si la Potencia administradora tenía responsabilidades, que no pensaba negar, no dejaba por eso de conservar un derecho de decisión, y no podía expresar de antemano su acuerdo con una recomendación sin haber estudiado sus consecuencias financieras, sobre todo cuando era posible la duplicación de actividades. Naturalmente, estaba dispuesto en cualquier caso a comunicar a su Go-

bierno todas las propuestas formuladas por el Comité sobre este particular.

216. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recordó que la mayoría de los miembros del Subcomité II había recomendado, basándose en la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, que se enviaran misiones visitadoras a las regiones del Atlántico, del Océano Indico y del Pacífico, por estimar que estas misiones permitirían reunir información directa sobre la situación de esos territorios y los medios más adecuados para lograr la aplicación de la Declaración. Lamentablemente de las actas y del informe se desprendía que las Potencias administradoras no compartían este punto de vista y recurrían a toda clase de pretextos para obstaculizar el envío de tales misiones. Los argumentos de estas Potencias eran deleznales. La delegación del Reino Unido decía que estaba dispuesta a transmitir a su Gobierno toda recomendación relativa al envío de misiones visitadoras, pero precisando que esta gestión no implicaba ninguna obligación por parte del Reino Unido. ¿Qué cabía pensar de un gobierno que quería ignorar la competencia de las Naciones Unidas y temía las consecuencias que pudiera tener en las esferas económica y política la intervención de la Organización? ¿Tenía algo que ocultar el Reino Unido en estos territorios? El representante de los Estados Unidos, por su parte, quisiera hacer creer que la situación en los territorios administrados por su Gobierno en el Pacífico era tan satisfactoria que el envío de una misión visitadora era perfectamente inútil. El Comité Especial había oído a menudo los hermosos discursos de la delegación norteamericana, pero de los hechos se desprendía que los Estados Unidos no habían hecho nada hasta entonces por asegurar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en sus territorios. Bastaba citar como ejemplo el informe de la misión visitadora de la OMS al Territorio de las islas del Pacífico, que mostró las condiciones sanitarias deplorables en que vivía la población de este Territorio. Australia también había seguido el ejemplo de sus amigos declarando que tenía el derecho de rechazar la organización de misiones visitadoras a las regiones bajo su jurisdicción. El Gobierno de Australia parecía olvidar que la Carta y la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) le imponían obligaciones respecto de los pueblos que administraba. Con esta negativa, Australia mostraba su desprecio por el derecho de los pueblos a la libre determinación, que había pasado a ser una de las normas fundamentales del derecho internacional y de la opinión de la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. En cuanto a Nueva Zelandia, su actitud no era mucho más satisfactoria, pues declaraba que no se oponía al envío de misiones visitadoras, pero que sólo podría recibirlas en el marco de un estudio más amplio de la situación en la región. Teniendo en cuenta la actitud negativa de las demás Potencias administradoras, la respuesta de Nueva Zelandia no era sino una negativa disimulada. Estas cuatro Potencias se esforzaban ante todo por disimular la situación que realmente existía en los baluartes del colonialismo que subsistían en el Pacífico y que utilizaban en su lucha contra los movimientos de liberación nacional del Asia sudoccidental y, en particular, contra el pueblo de Viet-Nam. Bastaba mirar el mapa para ver que todos estos territorios estaban situados a lo largo de importantes rutas del Océano Pacífico y revestían importancia capital para los enlaces militares. Más aún, antes de la segunda guerra mundial, las Potencias imperialistas rivalizaban ya para obtener

la posesión de los puntos de apoyo más importantes. Veinte años después de la cesación de las hostilidades, sus fuerzas armadas seguían allí y contribuían con su presencia a la explotación desenfrenada de los territorios. Después de la desaparición del sistema colonial en las otras regiones del mundo, las islas del Pacífico atraían más que nunca la codicia de las Potencias colonialistas. A este respecto resultaba interesante notar que desde entonces se había encontrado oro en las Islas Viti y plata y manganeso en las Islas Salomón, y que los fosfatos de Nauru constituían un botín atrayente para los monopolios extranjeros. En el plano agrícola los territorios del Pacífico también tenían gran interés para las grandes sociedades comerciales, pues por su clima ideal eran muy apropiados para la producción de bananas, copra, agrios, café, cacao y plantas medicinales. Deceosas de acrecentar aún más sus beneficios, las Potencias coloniales habían tomado toda una serie de medidas para consolidar su posición en las industrias de extracción y azucarera y en la agricultura tropical. Era de lamentar que los documentos de trabajo de la Secretaría contuvieran tan poca información a este respecto. No cabía extrañarse de ello, pues estos documentos se basaban esencialmente en las comunicaciones de las Potencias administradoras, que querían disimular a la opinión mundial la situación que realmente existía en esos territorios en materia de higiene pública, seguridad social, tenencia de tierras, condiciones de empleo y despido, y el pequeñísimo lugar que ocupaba la población autóctona en la administración pública.

217. Todas estas condiciones impedían al Comité darse cuenta de lo que pasaba en realidad y conocer a fondo las aspiraciones de los pueblos respecto de su condición política y social futura. Era importante que el Comité averiguase qué condiciones existían realmente en esos territorios. El único medio de hacerlo era visitarlos y ponerse en contacto directo con la población. Nada justificaba una negativa por parte de las Potencias administradoras. Toda negativa suya a atenerse a la resolución 2105 (XX) y a facilitar las actividades de esas misiones visitadoras no haría sino confirmar que las seguridades de que deseaban cooperar eran sólo vanas palabras destinadas a engañar a la opinión mundial. Si el representante del Reino Unido era sincero cuando declaraba que los informes de la Secretaría no reflejaban adecuadamente los progresos realizados en los territorios, ¿por qué no reconocía que el único medio de aclarar la situación consistía precisamente en enviar misiones visitadoras?

218. El representante de los Estados Unidos de América declaró, en respuesta a la intervención del representante de la Unión Soviética, que se proponía suministrar informaciones detalladas sobre los territorios administrados por los Estados Unidos en el Pacífico cuando llegase el momento de examinar esta cuestión. En cuanto a las bases militares norteamericanas, los miembros del Comité no ignoraban que si los Estados Unidos habían tenido que mantener allí su presencia militar, ello se debía a la actitud de ciertas Potencias y de los imperativos de su propia defensa y de la defensa de esos territorios. Cuando la situación de esta región del mundo se normalizara, el Gobierno de los Estados Unidos se impondría la obligación de dedicar a otras actividades y, en particular, al desarrollo económico de los territorios los recursos que se utilizaban actualmente con fines militares. Era de lamentar que en las condiciones actuales fuese imposible prever tal medida.

219. El representante de Australia se reservó el derecho de responder oportunamente a las observaciones del representante de la Unión Soviética. Todos sabían que ningún gobierno era más fiel que el Gobierno de Australia a las obligaciones que asumía. Desde la creación de las Naciones Unidas, seis o siete misiones visitadoras habían podido ir a los territorios que administraba, y sus miembros habían reconocido con satisfacción que se les había brindado una recepción muy acogedora y cordial. Invitó a los miembros del Comité a que se remitieran a los informes de estas misiones que describían detalladamente la situación de esos territorios.

220. El representante de la República Unida de Tanzania apoyó plenamente las conclusiones y recomendaciones de las diferentes partes del informe. En ese momento lo esencial era poner fin con la mayor rapidez posible al anacronismo que constituía la persistencia del colonialismo en pleno siglo XX. Por su parte, tenía la esperanza de que las Potencias administradoras no pondrían ningún obstáculo al envío de misiones visitadoras y colaborarían con ellas plenamente.

221. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que sólo deseaba poner de relieve que la respuesta del representante de los Estados Unidos confirmaba que los mencionados territorios, en vez de desarrollarse económica, social y políticamente, como disponía la Carta, se transformaban en bases militares.

222. En cuanto a las muchas misiones visitadoras mencionadas por el representante de Australia, estaban compuestas en su mayoría por representantes de Potencias administradoras — por ejemplo, los representantes del Reino Unido y de Australia habían sido miembros de misiones visitadoras a los territorios administrados por los Estados Unidos — y, por lo tanto, había que considerar sus conclusiones con cautela, ya que la opinión de los demás miembros no se había reflejado generalmente en sus informes.

223. En la misma sesión el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité II sobre esta cuestión e hizo suya la recomendación que en él se contenía, quedando entendido que se harían constar las reservas formuladas por ciertos miembros.

G. APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 2105 (XX) Y 2107 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL COMITÉ ESPECIAL: SOLICITUDES DIRIGIDAS A LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Introducción

224. En su 415a. sesión, celebrada el 18 de mayo de 1966, el Comité Especial pidió al Secretario General que se pusiera en comunicación con las diversas instituciones internacionales en relación con los llamamientos que dirigieran a las mismas la Asamblea General y el Comité Especial en sus resoluciones sobre la aplicación de la Declaración y sobre los territorios bajo administración portuguesa y el África Sudoccidental. El Comité Especial solicitó del Secretario General que pidiera a estas instituciones que informaran urgentemente al Comité, en primer lugar sobre si sus solicitudes y llamamientos habían sido estudiados por sus respectivos órganos ejecutivos con miras a una decisión, y en segundo lugar sobre qué medidas habían tomado o pen-

saban tomar en respuesta a dichos llamamientos y solicitudes.

225. Los párrafos de las resoluciones de la Asamblea General en que figuran solicitudes y llamamientos a las instituciones internacionales dicen así:

[Resolución 2105 (XX)]

"11. *Pide* a todos los Estados y a las instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se abstengan de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica mientras no renuncien ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial;"

[Resolución 2107 (XX)]

"9. *Hace un llamamiento* a todos los organismos especializados, y en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional, para que se abstengan de prestar a Portugal cualquier ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portugal no aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"10. *Pide* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a los organismos especializados interesados y a otras organizaciones internacionales de socorro que aumenten la ayuda que prestan a los refugiados de los territorios bajo administración portuguesa y a las personas que han padecido a causa de las operaciones militares;"

226. El Secretario General transmitió el llamamiento del Comité Especial a varias instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados, por cartas de 6 de junio de 1966.

Examen por el Comité Especial

Introducción

227. El Comité Especial examinó esta cuestión en sus 464a. a 487a. sesiones, celebradas entre el 9 y el 15 de septiembre de 1966.

228. Durante dicho examen el Comité Especial tuvo a la vista una nota de la Secretaría (A/AC.109/194 y Add.1) en la que figuraban las respuestas enviadas al Secretario General por diversas instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados, sobre la aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General y de las resoluciones pertinentes del Comité Especial.

Declaraciones generales de los miembros

229. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se congratuló de que se hubiera incluido en el programa del Comité Especial, por iniciativa del Grupo de Trabajo, el tema de la aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General.

230. La delegación soviética juzgaba — y esta opinión había sido expresada muchas veces por varias otras delegaciones — que el Comité Especial debía hacer todo lo posible para que se aplicaran efectivamente las resoluciones tendientes a la rápida eliminación de los regímenes coloniales. El Comité no podía considerar que su labor era eficaz si se conformaba con enunciar medidas que se estimaban deseables y se desinteresaba

de la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas.

231. De hecho, la tarea esencial del Comité Especial consistía en observar la aplicación por las Potencias coloniales de las decisiones de la Asamblea General referentes a los múltiples aspectos de la descolonización, tarea que era tanto más importante cuanto que esas Potencias trataban de frenar por todos los medios posibles la aplicación de dichas decisiones; hacían cuanto podían para mantener su dominación sobre los territorios coloniales — directamente o por conducto de gobiernos títeres — y se servían de estos últimos como puntos de apoyo en su lucha contra los movimientos de liberación nacional de África, Asia y América Latina.

232. Habida cuenta de esas maniobras de las Potencias coloniales, resultaba más urgente aún examinar cómo aplicaban las resoluciones de la Asamblea General y del Comité todos los interesados y, en particular, los organismos especializados de las Naciones Unidas.

233. A este respecto lamentó advertir que ciertos organismos hacían caso ómiso de las resoluciones de la Asamblea General, aunque se les había pedido directamente que adoptasen medidas para cumplimentarlas. No se podía estar satisfecho con las respuestas enviadas por los organismos especializados a las preguntas del Secretario General; éste les había pedido que, según una decisión adoptada por el Comité el 18 de mayo de 1966, informaran acerca de lo que habían hecho para aplicar las resoluciones de la Asamblea General y del Comité, y sobre todo para aplicar lo dispuesto en el párrafo 11 de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General. Algunos organismos especializados habían examinado ya la solicitud de la Asamblea General y adoptado ciertas medidas al respecto o se disponían a hacerlo — cabía congratularse, por ejemplo, de la decisión de la UNESCO de incluir en el programa de la 14a. Conferencia General el examen de las tareas que incumbían a esta Organización conforme con las resoluciones aprobadas por la Asamblea en su vigésimo período de sesiones sobre la liquidación del colonialismo y del racismo —, pero ciertas respuestas revelaban que varios organismos prescindían de las decisiones de la Asamblea General. Eso indicaban, en particular, las respuestas enviadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y por el Fondo Monetario Internacional. En realidad, estos organismos habían eludido la cuestión. Ni siquiera se habían dignado indicar, según les pedía el Secretario General, qué medidas se proponían adoptar con objeto de aplicar las decisiones de la Asamblea General. En realidad, semejante actitud equivalía a desconocer la voluntad de la mayoría abrumadora de los Miembros de las Naciones Unidas. Además, en el caso del Banco, ello se confirmaba por la política de este organismo, que acababa de aprobar dos empréstitos por un total de 30 millones de dólares para ampliar la red de centrales eléctricas de Portugal. Esa decisión era manifiestamente contraria a la resolución 2107 (XX) y, en particular, a su párrafo 9. El Banco había reincidido en fecha reciente al aprobar un empréstito de 20 millones de dólares cuyo beneficiario era precisamente el Gobierno de Sudáfrica, lo cual se añadía a once empréstitos, que ascendían en total a 241.800.000 dólares, ya otorgados por el Banco a dicho Gobierno. Era de notar que la dirección del Banco, en la cual dominaba el capital norteamericano, no ignoraba en modo alguno las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, que ya se le habían comunicado en marzo

de 1966. Estas medidas del Banco contradecían flagrantemente la política de las Naciones Unidas encaminada a negar toda asistencia a los racistas y colonialistas, y contradecían también las resoluciones de la Organización que pedían la aplicación de sanciones contra los colonialistas portugueses y sudafricanos. Al otorgar préstamos importantes a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica, el Banco no había hecho más que dar otra prueba de la criminal alianza del capital internacional y los colonialistas unidos para combatir los movimientos de liberación nacional de los pueblos del África Sudoccidental, Mozambique, Angola y otros pueblos coloniales.

234. El orador pidió con insistencia que el Comité condenara la decisión del Banco de otorgar empréstitos a Portugal y Sudáfrica y exigiese la anulación de los acuerdos ya concertados. El Comité debía hacer que el Banco respetase las resoluciones de las Naciones Unidas que condenaban el colonialismo en todas sus manifestaciones — y sobre todo el racismo y el apartheid — como crimen de lesa humanidad.

235. El representante de la República Unida de Tanzania expresó el aprecio de su delegación por las respuestas recibidas de ciertos órganos internacionales y organismos de las Naciones Unidas acerca de las resoluciones 2105 y 2107 (XX) de la Asamblea General. Observó con particular satisfacción que el Comité Regional para África de la OMS había aprobado una resolución por la que se suspendía el derecho de Portugal a participar en el Comité, así como toda asistencia a ese país.

236. Sin embargo, deseaba manifestar su desaprobación de la falta de consideración y de cooperación de que daba muestras el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Aun cuando en su respuesta el Banco afirmaba haber presentado la solicitud a sus Directores Ejecutivos, no era sólo sorprendente, sino un tanto chocante comprobar que en fecha reciente había otorgado al régimen neofascista de Sudáfrica un préstamo de 20 millones de dólares. El Banco había concedido también asistencia al régimen colonialista de Portugal para diversos proyectos que podían aumentar el poder de ese régimen para reprimir a la población africana de Mozambique, Angola y la Guinea llamada Portuguesa. Desde 1963, año en el que el Banco había firmado un acuerdo para un préstamo de unos cinco millones de dólares al Gobierno fascista de Portugal, ese Gobierno había redoblado su guerra de agresión contra la población de esos territorios. Aunque su delegación reconocía que las actividades del Banco eran beneficiosas en ciertas regiones, opinaba que la concesión de cualquier asistencia que pudiera aliviar algunos de los problemas que los colonialistas portugueses y los racistas sudafricanos se habían creado se oponía a los intereses y a las aspiraciones legítimas de los pueblos de Angola, Mozambique, la Guinea llamada Portuguesa y el África Sudoccidental. Encareció a todos los que amaban la libertad y la independencia que se sumaran a la lucha universal contra el colonialismo y sus delitos contra la humanidad. Había pruebas sobradas que mostraban que el régimen colonialista de Portugal no podría proseguir su política sin la asistencia que recibía de sus amigos. Análogamente, el régimen sudafricano podía seguir moviéndose de la opinión pública mundial porque recibía aliento y asistencia de sus hipócritas asociados comerciales.

237. El orador estimó que todos los organismos e instituciones internacionales deberían actuar de consu-

no para asegurarse de que se respetarían los principios en que se basaban las decisiones de la Asamblea General. Dicha acción concertada era de gran importancia material y moral para las masas de la población africana en su lucha por vencer a la agresión y al apartheid colonialistas. Toda medida de un órgano internacional que se opusiera a las decisiones de las Naciones Unidas era un reto a la Organización y un golpe a los movimientos de liberación nacional. Por ello, esperaba que el Banco Internacional volviese a examinar su posición y otorgase su plena cooperación no sólo a las Naciones Unidas sino también a los heroicos pueblos del África Sudoccidental y de la Guinea llamada Portuguesa, que estaban luchando contra fuerzas condenadas por la humanidad civilizada.

238. En conclusión, dijo que esperaba que todas las instituciones internacionales, que todavía no lo hubiesen hecho, adoptarían de inmediato todas las medidas pedidas en las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General.

239. El representante de Siria declaró que, cuando se había pedido al Secretario General que señalase a la atención de los organismos especializados las disposiciones de las resoluciones de las Naciones Unidas en las que les encarecía que se abstuvieran de conceder a Sudáfrica y a Portugal asistencia que pudiera oponerse a los objetivos de las Naciones Unidas, se esperaba que dichos organismos se comprometiesen en forma inequívoca a cumplir esas resoluciones. Algunos organismos así habían hecho, pero otros habían dado respuestas evasivas diciendo, por ejemplo, que habían remitido la cuestión a sus administradores. Acaso, por haber concedido préstamos a Sudáfrica y a Portugal, esos organismos no sabían cómo contestar, o tal vez estimaban que sus administradores se encontraban por encima de las Naciones Unidas. En uno u otro caso, se trataba de una cuestión grave. No obstante, por el momento, el Comité podía limitarse a decir que esperaba respuestas más completas en los casos en que el compromiso de aplicar efectiva y totalmente las resoluciones de las Naciones Unidas no dejaba lugar a duda.

240. El representante de Bulgaria, refiriéndose a los documentos A/AC.109/194 y Add.1, lamentó que ciertos organismos internacionales y organizaciones especializadas que formaban parte del sistema de las Naciones Unidas hubiesen esperado hasta la decisión del Comité del 18 de mayo de 1966 y hasta que el Secretario General enviara su nota para adoptar una actitud respecto de las resoluciones de la Asamblea General. Esto se aplicaba, en particular, al Banco Internacional y al Fondo Monetario Internacional, que se mencionaban concretamente en la resolución 2107 (XX).

241. Esos dos órganos habían vuelto a presentar una respuesta puramente formal, procedimiento que no reflejaba una actitud muy amable para con las Naciones Unidas y que fue objeto de censura en la Asamblea General. Se podía suponer que esas respuestas indicaban que las dos organizaciones mencionadas habían permanecido simplemente inactivas respecto de la tarea de descolonización emprendida por las Naciones Unidas. De hecho, sin embargo, aun después de la decisión adoptada por el Comité Especial el 18 de mayo, el Banco Internacional había aprobado dos préstamos por valor de 30 millones de dólares para que Portugal mejorara su red eléctrica. De ese modo el Banco había demostrado un auténtico menosprecio por las decisiones de las Naciones Unidas, particularmente la resolución

2107 (XX), en la que se pedía al Banco Internacional y al Fondo Monetario Internacional que no concedieran a Portugal ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de ese país no aplicase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Los préstamos concedidos a Portugal no constituían un caso aislado; el reciente préstamo de 20 millones de dólares al Gobierno de Sudáfrica era una prueba más de que era parte de la política del Banco cooperar con los regímenes colonialistas y racistas. Cabía observar que el Banco ya había concedido a Sudáfrica once préstamos por un valor total de 241.800.000 dólares. Los estudios hechos por el Comité Especial y el Subcomité I habían arrojado luz sobre el pernicioso papel que desempeñaban los intereses financieros internacionales asociados con los regímenes racistas y colonialistas para explotar los recursos naturales de los países coloniales. El Comité no debía permitir que esos intereses continuasen su política de prestar asistencia a los regímenes portugués y sudafricano por conducto de dos órganos afiliados a las Naciones Unidas.

242. El orador observó con agrado que ciertos organismos internacionales y organizaciones especializadas adoptaban una actitud seria ante las decisiones de la Asamblea General y los llamamientos que esa Asamblea les dirigiera. Algunas de esas entidades, como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, no sólo habían tenido en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la descolonización en sus trabajos en general, sino que habían adoptado medidas concretas para ponerlas en práctica. La Organización Mundial de la Salud y su decimonovena Asamblea eran dignas de elogio por haber adoptado una resolución en la que se suspendían los derechos de Portugal a participar en el Comité Regional de África y en las actividades regionales hasta que el Gobierno de ese país diese pruebas de que estaba dispuesto a respetar las decisiones de las Naciones Unidas, y asimismo se suspendía la asistencia técnica a Portugal en aplicación de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General.

243. El representante de la India dijo que su delegación había apoyado plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para inducir a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica a abandonar sus actuales políticas; en ese espíritu había apoyado las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General, en que se pedía a los organismos especializados que no prestaran asistencia a Portugal y a Sudáfrica hasta que renunciasen a su política actual. Dado que la resolución 2107 (XX) mencionaba en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional, a la delegación de la India le había descorazonado enterarse de que recientemente el Banco había concedido nuevos préstamos a Sudáfrica. Semejante ayuda tan sólo serviría para alentar a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica en su vergonzosa política. Al mismo tiempo, rendía homenaje al Banco y al Fondo por la labor realizada con miras a ayudar a que los países en desarrollo lograsen un nivel de vida apropiado.

Medidas adoptadas por el Comité Especial

244. En la 466a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 1966, el representante de la República Unida de Tanzania presentó un proyecto de resolución relativo a las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de

la Asamblea General: solicitudes dirigidas a las instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados (A/AC.109/L.330), patrocinado por Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia.

245. Al presentar el proyecto de resolución, el representante de la República Unida de Tanzania recordó que el Comité ya había examinado el informe del Secretario General acerca de las respuestas que había recibido al llamamiento dirigido a las instituciones internacionales, a las que se había pedido que no prestaran ayuda a Sudáfrica y Portugal. El grupo afroasiático y Yugoslavia habían estudiado la cuestión más a fondo y habían convenido en que había llegado el momento de tomar medidas concretas a este respecto. Por consiguiente, estos países habían redactado un proyecto de resolución (A/AC.109/L.330) en el que pedían a las instituciones internacionales que permitían a los regímenes portugués y sudafricano seguir tratando injustamente a africanos inocentes, que abandonasen tal política. Dio lectura del texto del proyecto.

246. En el proyecto de resolución no se pedía más que justicia y el Comité tenía el deber de aprobarlo.

247. El representante del Irán quiso insistir, según se indicaba en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en la necesidad de negar toda asistencia financiera o de otra índole a Sudáfrica y Portugal mientras siguiesen aplicando su política de opresión de la población africana.

248. Esta petición se dirigía en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional, que habían hecho mucho para acortar la distancia entre ricos y pobres ayudando a los países en desarrollo y que actuarían en contra de este objetivo si aportaran asistencia a Sudáfrica y a Portugal, ya que tal asistencia consolidaría el régimen de esos países, que seguían una política totalmente perjudicial para el bienestar de la población africana.

249. Confiaba en que todos los organismos especializados, particularmente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, se abstendrían de prestar ayuda a Sudáfrica y a Portugal, y en que el proyecto de resolución se aprobaría por unanimidad.

250. El representante de Túnez hubiera preferido que el Comité tomase una decisión sobre este proyecto de resolución por consenso. En efecto, estimaba que los términos en que estaba redactado el proyecto eran suficientemente moderados y cabía esperar la adhesión unánime de los miembros del Comité.

251. Lamentó que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional siguieran concediendo nuevos préstamos a Portugal y a Sudáfrica a pesar de que se les había comunicado las resoluciones 2105 y 2107 (XX) de la Asamblea General. En el proyecto de resolución que se acababa de presentar al Comité se les hacía un nuevo llamamiento para que cooperasen en la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General.

252. El representante de Bulgaria acogió satisfecho el proyecto de resolución A/AC.109/L.330. Estimaba, en efecto, que ya era hora de que el Comité adoptase una posición clara e inequívoca sobre las actividades de las organizaciones internacionales con respecto a

los problemas coloniales y particularmente con respecto a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General. Convino con los autores del proyecto de resolución en que el Comité debía expresar su agradecimiento a las instituciones internacionales y a los organismos especializados que trataban seriamente de actuar conforme con los llamamientos de la Asamblea y de colaborar en el proceso de descolonización, y debía expresar su repudio a las entidades que, como el Banco Internacional, adoptaban medidas contrarias a las decisiones de la Asamblea y continuaban ayudando a los colonialistas y racistas portugueses y sudafricanos. Compartía la opinión de los oradores que habían pedido que el Banco Internacional anulase los préstamos concedidos recientemente a Portugal y Sudáfrica. Aunque no figuraba en el proyecto de resolución una disposición de esa índole, el orador apoyaría este proyecto y votaría a su favor porque expresaba las ideas que las Naciones Unidas tenían que sostener.

253. El representante de Australia dijo que el proyecto de resolución A/AC.109/L.330, como expresión de preocupación por ciertos importantes aspectos de la política actual de Sudáfrica y Portugal, había despertado simpatías en la delegación australiana. Sin embargo, a pesar de oponerse a esa política, no podía sino expresar su inquietud ante el hecho de que se hicieran esfuerzos por controlar o encauzar la ayuda internacional con fines políticos, particularmente si se tenía en cuenta que limitar la ayuda en la práctica significaría la negación o la supresión de oportunidades para gente inocente. La observancia de los acuerdos era fundamental para las relaciones humanas. Conforme con el artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ninguna de estas dos organizaciones tenía que presentar formalmente recomendaciones a la otra sin proceder previamente a oportunas consultas, y las Naciones Unidas reconocían que las medidas que tomase el Banco respecto de la concesión de préstamos serían determinadas por el Banco con arreglo a su propio juicio independientemente formulado. El proyecto de resolución presentado al Comité no parecía ajustarse ni al espíritu ni a la letra de este Acuerdo. Por esas razones, la delegación de Australia no podía apoyar el proyecto de resolución en su forma actual.

254. El representante del Reino Unido recordó que en el último período de sesiones de la Asamblea General¹⁵ su delegación había reservado su posición respecto de la cuestión de la introducción de controversias políticas en las organizaciones especializadas. Había reservado en consecuencia su posición sobre el mismo asunto en la 415a. sesión del Comité Especial y quería reservarla ahora en lo tocante al proyecto de resolución A/AC.109/L.330, sobre el cual se abstendría en la votación.

255. El representante de los Estados Unidos de América reservó la posición de su delegación sobre el proyecto de resolución, habida cuenta de los acuerdos concertados por las Naciones Unidas con el Banco y con el Fondo; a este respecto, compartió las reservas expresadas por la delegación de Australia.

256. El representante del Uruguay dijo que había votado a favor de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, pero no a favor de la resolución 2107 (XX); en vista de ello, y por no poseer instrucciones, tendría que abstenerse en la votación sobre el proyecto

¹⁵ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Sesiones Plenarias, 1395a. sesión.

de resolución. Esta abstención no afectaba la posición básica del Uruguay en cuanto al repudio de las políticas de Sudáfrica y Portugal.

257. El representante de Dinamarca declaró que en el último período de sesiones de la Asamblea General su delegación había reservado su posición o bien se había abstenido en la votación sobre disposiciones semejantes a las que figuraban en el presente proyecto de resolución. Por consiguiente, tenía que reservar también su posición con respecto a este proyecto de resolución. Su actitud era aproximadamente la misma que la expresada por el representante de Australia.

258. En la 467a. sesión, celebrada el 15 de septiembre de 1966, el Presidente comunicó al Comité Especial, antes de poner a votación el proyecto de resolución, que los coautores habían revisado el texto del párrafo 3 de la parte dispositiva para que dijera "de prestar toda ayuda financiera o de otra índole" donde decía "de prestar toda ayuda financiera".

259. En la misma sesión el Comité Especial aprobó el proyecto de resolución (A/AC.109/L.320), con las enmiendas introducidas verbalmente, por 16 votos contra ninguno y 7 abstenciones.

260. El representante de Venezuela, haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dijo que se había visto obligado a abstenerse por la razón fundamental de que no había recibido instrucciones. En conformidad con la actitud que asumiera sobre la misma cuestión en el último período de sesiones de la Asamblea General, esa abstención no debía interpretarse como un cambio de posición respecto de la política de Portugal y de Sudáfrica, posición bien conocida del Comité Especial.

261. La resolución (A/AC.109/206) aprobada por el Comité Especial en su 467a. sesión, el 15 de septiembre de 1966, y titulada "Resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General: llamamiento a las instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados", dice lo siguiente:

"El Comité Especial, encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo examinado las respuestas (A/AC.109/194 y Add.1) enviadas por las instituciones internacionales y los organismos especializados sobre la aplicación del párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX), de 20 de diciembre de 1965, y de los párrafos 9 y 10 de la parte dispositiva de la resolución 2107 (XX), de 21 de diciembre de 1965, ambas de la Asamblea General, que contienen solicitudes y llamamientos dirigidos a aquéllos,

"Observando con satisfacción que varias instituciones internacionales y organismos especializados han adoptado o se proponen adoptar en un futuro próximo medidas encaminadas a la aplicación de las mencionadas resoluciones,

"Deplorando que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional sigan concediendo préstamos y créditos considerables a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica, haciendo caso omiso de las mencionadas resoluciones,

"1. Expresa su reconocimiento a esas instituciones internacionales y organismos especializados que cooperan con las Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la

Asamblea General y apela a ellos para que no cejen en sus esfuerzos al respecto;

"2. Expresa su profunda decepción por la concesión de nuevos préstamos y créditos a los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional;

"3. Insta al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional a cooperar en la aplicación de las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX), absteniéndose de prestar toda ayuda financiera o de otra índole a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica mientras éstos no renuncien a su política de dominación colonial y de discriminación racial."

262. El texto de esta resolución se transmitió a las instituciones internacionales y a los organismos especializados por carta de 2 de octubre de 1966.

H. CUESTIÓN DE LA LISTA DE LOS TERRITORIOS A LOS QUE SE APLICA LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES

263. En su informe a la Asamblea General en el vigésimo período de sesiones, el Comité Especial declaró que a reserva de las instrucciones que estimase oportuno formular la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones con miras a acelerar la aplicación de la Declaración, el Comité Especial tenía el propósito de continuar el examen de la cuestión de la lista de los territorios a los que se aplicaba la Declaración (A/6000/Rev.1, cap. I, párr. 66).

264. En el séptimo párrafo del preámbulo de su resolución 2105 (XX), de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea General tomó nota "de las medidas adoptadas y previstas por el Comité Especial respecto de la lista de territorios a los que se aplica la Declaración".

265. En su 471a. sesión el Comité Especial examinó un informe sobre esta cuestión presentado por el Grupo de Trabajo, que se reproduce en los párrafos 6 a 10 del 25º informe de este último (A/AC.109/L.338). El tenor de esos párrafos es el siguiente:

"6. El Grupo de Trabajo advirtió que en su informe a la Asamblea General en el vigésimo período de sesiones el Comité Especial había declarado lo siguiente: "A reserva de las instrucciones que estime oportuno formular la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones con miras a acelerar la aplicación de la Declaración, el Comité Especial tiene el propósito de continuar el examen de la cuestión de la lista de los Territorios a los que se aplica la Declaración" (A/6000/Rev.1, cap. I, párr. 66).

"7. El Grupo de Trabajo sabía también que, en el séptimo párrafo del preámbulo de su resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea General tomó nota "de las medidas adoptadas y previstas por el Comité Especial respecto de la lista de territorios a los que se aplica la Declaración".

"8. A este respecto, los miembros recordaron que, según indicó en su informe a la Asamblea General en el vigésimo período de sesiones (ibid., párr. 65), el Comité Especial tuvo a la vista en su último período de sesiones una carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en la cual se solicitaba que se inclu-

yera la cuestión de Puerto Rico en el programa del Comité Especial, pero que, por falta de tiempo, el Comité no había podido examinar dicha solicitud.

"9. Los miembros recordaron asimismo que en la declaración que hizo en la sesión de apertura de la reunión del Comité Especial en Addis Abeba, el 6 de junio de 1966 (A/AC.109/SR.433), el Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana (OUA) señaló la omisión del archipiélago de las Comoras de la lista de los territorios a los que se aplica la Declaración, y pidió que se hiciese la correspondiente rectificación.

"10. Después de un intercambio de opiniones sobre diversas sugerencias, el Grupo de Trabajo acordó que la inclusión de esos territorios, a saber: Puerto Rico y el archipiélago de las Comoras, requería un nuevo estudio detallado y que, habida cuenta del poco tiempo disponible en el actual período de sesiones, dicho estudio habría de realizarse lo antes posible durante el próximo período de sesiones del Comité Especial. Convino además en que también estudiaría entonces cualesquiera otros territorios que pudieran incluirse en la lista de "todos los demás territorios que no han logrado aún la independencia".

266. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la cuestión de la inclusión de Puerto Rico en el programa del Comité Especial había sido ya estudiada el año anterior, y que de los párrafos 65 y 66 del capítulo I del documento A/6000/Rev.1 se desprendía claramente que el Comité había decidido continuar el examen de la cuestión en ulteriores períodos de sesiones. Desde entonces se habían recibido muchas solicitudes en el mismo sentido, declarando que la inclusión de Puerto Rico en el programa del Comité estaba plenamente justificada. En consecuencia, su delegación era partidaria de que se examinara la cuestión durante el presente período de sesiones; era un problema perfectamente claro, pues no se había dado a la población de Puerto Rico la oportunidad de expresar libremente sus deseos en cuanto a la condición futura de su país.

267. El representante de Bulgaria manifestó que su delegación estaba de acuerdo con el consenso de que la cuestión de la inclusión de Puerto Rico en el programa del Comité debía examinarse al comienzo del próximo período de sesiones. El Comité Especial era totalmente competente para estudiar el caso de Puerto Rico como territorio dependiente al que se aplicaba plenamente la resolución 1514 (XV). La Declaración que figuraba en dicha resolución era la razón de ser del Comité, y no se podía permitir que declaraciones que figuraban en documentos de las Naciones Unidas anteriores a dicha Declaración impidiesen al Comité Especial tomar en consideración todos los territorios dependientes. Celebró la petición formulada por la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados en 1964 de que el Comité Especial examinara la cuestión de Puerto Rico a la luz de la resolución 1514 (XV).

268. La representante de los Estados Unidos de América explicó que el Commonwealth de Puerto Rico disfrutaba de la plenitud del gobierno propio y la autonomía, como había confirmado la Asamblea General y, por consiguiente, no estaba sujeto a la jurisdicción del Comité Especial. Su delegación consideraría como una cuestión muy seria toda tentativa de examinar ese punto, porque equivaldría a poner en tela de juicio el hecho de que Puerto Rico gozaba de gobierno propio.

Esa condición se había establecido después de una votación celebrada en Puerto Rico en 1952 y en la que la población se pronunció en ese sentido por una mayoría abrumadora. Como la Asamblea General había aprobado en 1953 la resolución 748 (VIII), su delegación estimaba que el tema no debía incluirse en el programa del Comité Especial.

269. En la misma sesión el Comité Especial aprobó las propuestas contenidas en el párrafo 10 del informe del Grupo de Trabajo, en el entendimiento de que las reservas manifestadas por los miembros se harían constar en acta.

I. EXAMEN DE OTRAS CUESTIONES

Aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo que respecta a los territorios coloniales examinados por el Comité Especial durante sus reuniones en Africa (1966)

270. En sus 454a. y 455a. sesiones, celebradas en Argel el 21 y 22 de junio de 1966, el Comité Especial examinó un proyecto de resolución sobre la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo que respecta a los territorios coloniales examinados por el Comité durante sus reuniones en Africa (1966). El proyecto de resolución fue aprobado por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966 (A/AC.109/188). En el capítulo II del presente informe se reseña detalladamente el examen de esta cuestión por el Comité Especial.

Informe de la delegación del Comité Especial a la Conferencia Internacional sobre el Africa Sudoccidental, Oxford (marzo de 1966)

271. En la 396a. sesión el Comité Especial decidió aceptar una invitación de que enviara observadores a una conferencia internacional sobre el Africa Sudoccidental que iba a celebrarse en Oxford, Inglaterra, del 23 al 27 de marzo de 1966. En la 398a. sesión el Comité decidió que la delegación de observadores que asistirían a la conferencia en nombre del Comité Especial estaría integrada por el Sr. Hans Tabor (Dinamarca) y el Sr. Gershon Collier (Sierra Leona). El Comité Especial tuvo en cuenta el informe de la delegación a la Conferencia (A/AC.109/L.290) al examinar la cuestión del Africa Sudoccidental, documento que se reseña en el capítulo IV del presente informe.

Cooperación con la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Arabes

272. En su 403a. sesión el Comité Especial decidió acceder a una solicitud cablegráfica del Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de que la Organización estuviera representada por observadores en las sesiones del Comité Especial. Por consiguiente, asistieron representantes de la Organización a las reuniones del Comité en la Sede de las Naciones Unidas, en Dar es Salaam y en Addis Abeba.

273. En la 440a. sesión el Comité decidió acceder a una solicitud de 11 de junio de 1966 enviada por el Secretario General interino de la Liga de los Estados Arabes (A/AC.109/182) de que la Liga estuviera representada por observadores en las reuniones del Comité Especial celebradas en El Cairo. De conformidad con esta decisión, un representante de la Liga de los

Estados Arabes asistió como observador a las reuniones del Comité celebradas en El Cairo.

274. En carta de 20 de septiembre de 1966 el Presidente del Comité Especial transmitió el informe del Subcomité de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia al Secretario General Administrativo de la OUA en virtud del inciso c) del párrafo 14 de la sección II de dicho informe.

Cuestiones relativas a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

a) *Nombramiento de representantes especiales de las Naciones Unidas*

275. El Comité Especial, en el párrafo 7 de la parte dispositiva de su resolución de 9 de junio de 1966 sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia (A/AC.109/178) pidió al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial, nombrase representantes especiales de las Naciones Unidas en cada uno de los tres Territorios para asistirlos en su avance hacia la independencia y que informara a la Asamblea General tan pronto como fuese posible. El informe del Secretario General sobre esta cuestión se distribuyó entre los miembros del Comité Especial en el documento A/AC.109/199.

b) *Estado del Fondo para el Desarrollo Económico de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia*

276. En el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 2063 (XX) del 16 de diciembre de 1965 sobre la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, la Asamblea General pidió al Secretario General que nombrase representantes residentes en los tres Territorios y que presentase a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, un informe sobre el estado del Fondo creado en virtud del párrafo 7 de la misma resolución. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de su resolución de 9 de junio de 1966 (A/AC.109/178), el Comité Especial pidió nuevamente a todos los Estados que contribuyeran al Fondo antes mencionado.

277. En el informe que presentó a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones (A/6439), el Secretario General lamentó que, dada la insuficiencia de las contribuciones prometidas hasta el momento, no habría sido posible constituir el Fondo (*ibid.*, párr. 6). Las promesas concretas de contribución recibidas hasta esa fecha por el Fondo eran las siguientes: Chipre, 100 libras esterlinas; República Democrática del Congo, 2.500 dólares de los EE.UU., y Liberia, 6.000 dólares. Además, Dinamarca y la India habían indicado que sus Gobiernos contribuirían al Fondo cuando empezase a funcionar. Desde entonces se ha recibido una nueva promesa de contribución por valor de 2.000 dólares de los EE.UU., hecha por Kuwait.

278. Por lo que respecta al nombramiento de los representantes residentes en los tres Territorios, el Secretario General manifestó en su informe (*ibid.*, párr. 7) que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había establecido oficinas separadas en cada uno de los Territorios. Estas tenían a su frente un Representante Residente Adjunto, y dependían del Representante Regional del PNUD en Lusaka, Zambia.

Información sobre los territorios no autónomos transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta

279. La Asamblea General, en su resolución 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, decidió disolver la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos y encargó sus funciones al Comité Especial. Por consiguiente, el Comité Especial examinó en sus 472a. y 473a. sesiones, celebradas el 12 y 19 de octubre de 1966, un tema relativo a la información sobre territorios no autónomos transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Los detalles del examen de este tema por el Comité Especial figuran en el capítulo XXIII del presente informe.

Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur, así como su modo de funcionamiento

280. En su 328a. sesión, celebrada el 22 de abril de 1965, el Comité Especial aprobó una resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur (A/6000/Rev.1, cap. III, párr. 292). En el párrafo 9 de la parte dispositiva de dicha resolución el Comité Especial decidió "estudiar, en cooperación con el Secretario General y los organismos de las Naciones Unidas, las consecuencias de las actividades de intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur, así como su modo de funcionamiento, a fin de determinar su influencia económica y política".

281. En su 409a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1966, el Comité Especial decidió sin objeciones remitir al Subcomité I, para examen, el tema relativo a las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur así como su modo de funcionamiento.

282. El Subcomité I presentó su informe sobre este tema al Comité Especial el 29 de septiembre de 1966. El examen del informe por el Comité Especial se reseña detalladamente en el capítulo III del presente informe.

Actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que están obstaculizando la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios bajo administración portuguesa

283. El Comité Especial, en la resolución aprobada en su 277a. sesión, el 3 de julio de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 352), "pide al Subcomité I del Comité Especial que, con asistencia del Secretario General, examine las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que están obstaculizando la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los territorios bajo administración portuguesa". Basándose en el estudio del Subcomité I, el Comité Especial presentó un informe sobre este asunto a la Asamblea General, en el vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. V), en el que hacía suyas las conclusiones y recomendaciones del Subcomité. En sus conclusiones y recomendaciones, el Subcomité comunicaba al Comité Especial lo siguiente:

"...Con el fin de tener una idea más cabal de los efectos de las actividades extranjeras económicas y de otra índole en los demás sectores principales de la vida económica de los territorios bajo administración

portuguesa, el Subcomité ha solicitado de la Secretaría que prepare documentos básicos sobre las industrias agropecuarias y conexas, los ferrocarriles de propiedad extranjera y las relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Una vez que el Subcomité haya estudiado la información adicional, presentará un informe al Comité Especial y formulará las nuevas observaciones, conclusiones y recomendaciones que fueren necesarias." (A/6000/Rev.1, cap. V, apéndice, párr. 278).

284. El Subcomité I prosiguió el examen de esta cuestión en 1966 y presentó un informe complementario al Comité Especial en la 470a. reunión, celebrada el 6 de octubre de 1966. En el capítulo V del presente documento figura una relación del examen de dicho informe por el Comité Especial.

Asuntos relacionados con los territorios pequeños

285. En el párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX), de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea General "pide al Comité Especial que preste suma atención a los territorios pequeños y que recomiende a la Asamblea General los medios más adecuados y las medidas que convenga adoptar para que las poblaciones de estos territorios puedan ejercer plenamente sus derechos a la libre determinación y la independencia".

286. Al pedir a los Subcomités I, II y III que llevarán a cabo las tareas que se les habían asignado, el Comité Especial señaló a su atención la mencionada disposición de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General. El Comité Especial también tuvo en cuenta esta misma disposición para llegar a sus conclusiones y recomendaciones referentes a los territorios pequeños, las cuales se reseñan detalladamente en los capítulos pertinentes del presente informe.

287. Con sujeción a las directivas que desee dar la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones para una rápida aplicación de la Declaración con respecto a estos territorios, el Comité Especial continuará guiándose por esta y otras disposiciones de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General.

Fecha límite para la concesión de la independencia a los territorios

288. En el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX) la Asamblea General "pide al Comité Especial que, siempre que lo considere oportuno, recomiende una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los Territorios considerados, conforme a los deseos de su población".

289. Al pedir a los Subcomités I, II y III que llevarán a cabo las tareas que se les habían asignado, el Comité Especial señaló a su atención la mencionada disposición de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General. En su examen de cada uno de los territorios el Comité Especial también tuvo en cuenta dicha disposición.

290. Con sujeción a las directivas que desee dar la Asamblea General a este respecto en su vigésimo primer período de sesiones, el Comité Especial tiene intención de proseguir su examen de todos los territorios que aún no han alcanzado la independencia y sobre este particular continuará guiándose por esta y otras dispo-

siciones de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General.

Programa de reuniones y métodos de trabajo

291. En su resolución 2116 (XX) de 21 de diciembre de 1965 relativa al programa de conferencias, la Asamblea General decide, entre otras cosas, "que los lugares y fechas de las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas se establezcan con arreglo a un plan fijo de conferencias, que entrará en vigor el 1º de enero de 1966 por un período de tres años". Se pide al Secretario General "que cada año presente a la Asamblea General un programa básico de conferencias para el año siguiente, que se establecerá de conformidad con el plan aquí descrito después de haber consultado, cuando proceda, con los órganos interesados". También "insta a todos los órganos de las Naciones Unidas... a examinar sus métodos de trabajo, así como la frecuencia y duración de los períodos de sesiones, a la luz de la presente resolución, del creciente número de reuniones, del consiguiente esfuerzo para los servicios disponibles y de la dificultad que se plantea para la participación efectiva de los miembros".

292. Al aprobar el 25º informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.338), el Comité Especial, en su 471a. sesión, celebrada el 10 de octubre de 1966, decidió celebrar dos períodos de sesiones en 1967, el primero del 20 de febrero al 31 de mayo, y el segundo del 17 de julio al 25 de agosto. Ello representará catorce semanas de trabajo durante el primer período de sesiones, un descanso de seis semanas durante junio y julio, y seis semanas de trabajo durante el segundo período de sesiones.

293. Al tomar esta decisión, el Comité Especial entendió que el mencionado programa de reuniones no impediría la celebración de reuniones fuera de los períodos de sesiones con carácter de urgencia si los acontecimientos lo justificaban. Además, la decisión se basaba en el cálculo de que el Comité Especial podría terminar la mayor parte de su trabajo para el final de su primer período de sesiones. En el primer período de sesiones se incluirían también las reuniones que el Comité Especial pudiera decidir celebrar fuera de la Sede. Al fijar la fecha límite antes indicada, el Comité Especial también tuvo en cuenta el período de sesiones anual del Consejo de Administración Fiduciaria que normalmente comienza a fines de mayo y dura cerca de un mes. El Comité Especial planeaba que el segundo período de sesiones, que debía terminar antes de la apertura del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, estaría dedicado al examen de los asuntos pendientes, así como a los acontecimientos que se produjeran después de la clausura del primer período de sesiones y que el Comité Especial tal vez deseara señalar a la atención de la Asamblea.

294. El Comité Especial decidió también que todos los grupos visitantes que enviase a los Territorios fijaran sus visitas para una fecha que permitiese que sus informes fuesen examinados por el Comité Especial al principio de su segundo período de sesiones.

295. Por último, el Comité Especial resolvió que, con el fin de asegurar el cumplimiento del programa señalado, determinaría en primer lugar su programa de trabajo con cierto detalle al principio de su primer período de sesiones y, en segundo lugar, decidiría a qué

Territorios enviaría grupos visitadores, con objeto de dejar suficiente tiempo para las negociaciones, planificación y organización administrativa necesarias.

J. RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Consejo de Seguridad

296. La Asamblea General, en su resolución 1956 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, invitó al Comité Especial a que informase al Consejo de Seguridad de todos los hechos acaecidos en cualquiera de los territorios que examinase y que pudiesen constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

a) *Rhodesia del Sur*

297. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de su resolución de 21 de abril de 1966 (A/AC.109/158) el Comité Especial recomendó al Consejo de Seguridad que estudiase “con urgencia la adopción de las demás medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para poner en práctica sus decisiones relativas a Rhodesia del Sur”. El texto de la resolución y las actas de los debates sostenidos sobre esa cuestión en el Comité Especial fueron transmitidos al Presidente del Consejo de Seguridad el 21 de abril de 1966¹⁶.

298. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de su resolución de 31 de mayo de 1966 (A/AC.109/167) el Comité Especial señaló una vez más a la atención del Consejo de Seguridad la gravedad de la situación que prevalecía en Rhodesia del Sur, a fin de que recomendase las sanciones obligatorias que preveía el Capítulo VII de la Carta y adoptase las medidas que procedieran para conseguir la aplicación eficaz de sanciones en caso de que algún Estado se negara a aplicarlas. En el párrafo 7 de la parte dispositiva de la misma resolución el Comité Especial recomendó al Consejo de Seguridad que pidiese al Gobierno del Reino Unido que adoptase las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta a fin de impedir, mediante el uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres, que llegasen a Rhodesia del Sur suministros de ningún tipo, inclusive petróleo y sus productos. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 14 de junio de 1966¹⁷.

b) *África Sudoccidental*

299. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de su resolución de 9 de junio de 1966 (A/AC.109/177) el Comité Especial señaló a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación que prevalecía en el África Sudoccidental, “y su empeoramiento causado por la rebelión racista de Rhodesia del Sur, así como sus consecuencias para la paz y seguridad internacionales”. El Comité Especial, en el párrafo 6 de la parte dispositiva de esa misma resolución, recomendó al Consejo de Seguridad que hiciese obligatorio “para todos los Estados el cumplimiento de las medidas contenidas en la resolución 1899 (XVIII), de 13 de noviembre de 1963, de la Asamblea General, y en particular las mencionadas en el párrafo 7 de la misma”. Recomendó asimismo al

Consejo de Seguridad que adoptase las medidas necesarias para garantizar que en el Territorio se eliminasen todas las bases e instalaciones militares. El texto de la resolución se transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el 14 de junio de 1966¹⁸.

c) *Adén*

300. En el párrafo 10 de la parte dispositiva de su resolución de 15 de junio de 1966 (A/AC.109/179/Rev.1) el Comité Especial señaló a la atención del Consejo de Seguridad la peligrosa situación que existía en la zona “como consecuencia de las acciones militares británicas contra el pueblo del Territorio”. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 15 de junio de 1966¹⁹.

d) *Territorios bajo administración portuguesa*

301. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de su resolución de 22 de junio de 1966 (A/AC.109/187) el Comité Especial recomendó al Consejo de Seguridad que impusiera “a todos los Estados la obligación de aplicar las medidas que figuran en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, en particular las que se mencionan en el párrafo 7 de la misma”. El texto de esta resolución se transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el 1º de julio de 1966²⁰.

e) *Territorios coloniales examinados por el Comité Especial durante sus reuniones en África (1966)*

302. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de su resolución de 22 de junio de 1966 (A/AC.109/188) el Comité Especial recomendó al Consejo de Seguridad que diese “obligatoriedad a las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas contra Portugal, Sudáfrica y el régimen de minoría racista de Rhodesia del Sur”. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 1º de julio de 1966²¹.

Consejo de Administración Fiduciaria

303. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 1654 (XVI) de la Asamblea General, en la que se pedía al Consejo de Administración Fiduciaria que ayudara al Comité Especial en su labor, el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria, por carta de 25 de julio de 1966 (A/AC.109/191) dirigida al Presidente del Comité Especial, informó al Comité Especial que el Consejo de Administración Fiduciaria había examinado en su 33º período de sesiones la situación de los Territorios en fideicomiso de las islas del Pacífico, Nauru y Nueva Guinea. En la carta se señalaba que las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria así como las observaciones hechas a título individual por los miembros del Consejo, figuraban en su informe al Consejo de Seguridad, respecto del Territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico²², y en su informe a la Asamblea General, respecto de Nauru y Nueva Guinea (A/6304).

¹⁶ *Ibid.*, documento S/7370.

¹⁷ *Ibid.*, documento S/7372.

¹⁸ *Ibid.*, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7394.

¹⁹ *Ibid.*, documento S/7395.

²⁰ *Ibid.*, Vigésimo Primer Año, Suplemento Especial No. 1.

²¹ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7263.*

²² *Ibid.*, documento S/7371.

Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica

304. El Presidente del Comité Especial ha mantenido estrecho contacto con el Presidente del Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica en lo tocante a asuntos de interés común relativos a la labor de ambos Comités.

305. Por carta del 14 de septiembre de 1966 dirigida al Presidente del Comité Especial, el Presidente del Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica hizo referencia a un memorando enviado por el Sr. Matthew Nkoana, del Pan-Africanist Congress of South Africa, sobre la detención en Basutolandia del Sr. John Nyati Pokela, miembro de ese partido (A/AC.109/204). El memorando, reproducido en el docu-

mento A/AC.115/L.182, se distribuyó entre los miembros del Comité Especial.

Organismos especializados

306. La colaboración de los organismos especializados con el Comité Especial se ha mantenido mediante la presencia en las sesiones del Comité Especial de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

307. Durante el período que abarca el presente informe, el Comité Especial aprobó las siguientes resoluciones que contenían llamamientos o peticiones a instituciones internacionales, incluidos los organismos especializados:

<i>Resolución aprobada el</i>		<i>Territorios</i>	<i>Párrafos pertinentes de la parte dispositiva</i>
31 de mayo de 1966	(A/AC.109/167)	Rhodesia del Sur	Párrafo 11
9 de junio de 1966	(A/AC.109/177)	Africa Sudoccidental	Párrafo 9
9 de junio de 1966	(A/AC.109/178)	Basutolandia, Bechuania y Swazilandia	Párrafo 6
15 de junio de 1966	(A/AC.109/179/Rev.1).	Adén	Párrafo 11
22 de junio de 1966	(A/AC.109/187)	Territorios bajo administración portuguesa	Párrafos 8 y 9
22 de junio de 1966	(A/AC.109/188)	Territorios coloniales examinados por el Comité Especial durante sus reuniones en Africa (1966)	Párrafos 6 y 8
15 de septiembre de 1966	(A/AC.109/206)	Territorios bajo administración portuguesa y Africa Sudoccidental	Párrafo 3

308. El Secretario General transmitió el texto de esas resoluciones a los organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como a las instituciones internacionales interesadas, con objeto de señalarlas a su atención. Las partes sustantivas de las respuestas de esas organizaciones

sobre la aplicación de las resoluciones mencionadas se reprodujeron y se distribuyeron entre los miembros del Comité Especial en los documentos siguientes durante los debates relativos a los Territorios correspondientes:

<i>Territorios</i>	<i>Organización interesada</i>	<i>Signatura del documento</i>
Rhodesia del Sur	Comité Internacional de la Cruz Roja	A/AC.109/192
	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)	
	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)	A/AC.109/192/Add.1
	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	
	Organización Mundial de la Salud (OMS)	
	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	A/AC.109/192/Add.2

<i>Territorios</i>	<i>Organización interesada</i>	<i>Signatura del documento</i>
Africa Sudoccidental	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	A/AC.109/193/Add.1
	Organización Mundial de la Salud (OMS)	
	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	
Basutolandia, Bechuania y Swazilandia	Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)	A/AC.109/200
	Organización Mundial de la Salud (OMS)	
	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	
	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	
Adén	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	A/AC.109/161
	Comité Internacional de la Cruz Roja	
	Liga de Sociedades de la Cruz Roja	
Territorios bajo administración portuguesa	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)	A/AC.109/194
	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Asociación Internacional de Fomento (AIF), Corporación Financiera Internacional (CFI)	
	Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)	
	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	
	Fondo Monetario Internacional (FMI)	
	Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)	
	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	
	Unión Postal Universal (UPU)	
	Organización Mundial de la Salud (OMS)	
	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)	
	Comité Internacional de la Cruz Roja	

K. EXAMEN DE LOS TRABAJOS²³

309. En la resolución 2105 (XX), la Asamblea General renovó el mandato del Comité Especial y le pidió que prosiguiera su labor y que continuara investigando

²³ Las opiniones y reservas formuladas por distintos miembros sobre las cuestiones que se tratan en la presente sección se consignan en los capítulos pertinentes del presente informe (véanse los capítulos II a XXII).

los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a todos los territorios que aún no hubieran logrado la independencia. La Asamblea pidió también al Comité Especial que prestara suma atención a los pequeños territorios; que recomendara una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los territorios cuando lo considerara apropiado; que informase al Consejo de Seguridad de todos los hechos

nuevos que hubieran ocurrido en cualquiera de los territorios y que pudieran constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que hiciera sugerencias que el Consejo pudiera atender al estudiar las medidas que convenía adoptar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

310. Al iniciar su trabajo en 1966, muchos de los miembros del Comité Especial expresaron la opinión de que los progresos realizados en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales habían sido muy inferiores a las esperanzas que había despertado su aprobación casi seis años antes. Se observó que en general no habían disminuido las persistentes violaciones del derecho de los países y pueblos coloniales a la libre determinación, ni las actividades represivas de las Potencias interesadas, en confabulación con intereses creados económicos y de otra índole, contra la lucha de los movimientos de liberación nacional. Se expresó la creencia de que este anacrónico estado de cosas representaba una de las causas fundamentales de la deplorable situación internacional, que prevalece. En especial, muchos miembros experimentaban gran preocupación por el hecho de que, debido a la deliberada oposición y a la continua falta de cooperación de las Potencias administradoras interesadas, muchos graves y difíciles problemas coloniales parecían no haberse acercado perceptiblemente a una solución pacífica dentro del contexto de la Declaración, sino que habían alcanzado proporciones alarmantes, que entrañaban peligrosas posibilidades. Fue en este contexto como el Comité abordó su tarea a principios de 1966.

311. En el curso de su labor durante 1966, el Comité Especial continuó examinando la aplicación de la Declaración con respecto a territorios determinados. En el caso de algunos territorios, debido a nuevos acontecimientos que les afectaban, fue necesario examinarlos más de una vez. El Comité también dio cima a sus estudios sobre las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole en los territorios bajo administración portuguesa y en Rhodesia del Sur; sobre la base de esos estudios hizo recomendaciones a la Asamblea General (véanse capítulos III y V del presente informe). El Comité también continuó desempeñando las funciones adicionales que le había confiado la Asamblea General con respecto a la cuestión del África Sudoccidental y a la información sobre territorios no autónomos, transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.

312. Este programa de trabajo impuso una pesada carga a los recursos del Comité Especial, a la que éste trató de hacer frente mediante un intenso programa de reuniones tanto en sesiones plenarias como en subcomités. Sin embargo, pese al hecho de que el Comité celebró reuniones desde marzo hasta noviembre, con una breve interrupción, no pudo examinar de manera adecuada algunas de las cuestiones que figuraban en su programa.

313. Durante el período que se examina, el Comité Especial tomó nota de que habían alcanzado la independencia tres Territorios que habían sido objeto de estudio por parte de la Asamblea General y del Comité Especial, a saber, la Guayana Británica (Guyana); Bechuania (Botswana), y Basutolandia (Lesotho). También tomó nota de que se había fijado el 30 de noviembre de 1966 como fecha de la independencia de Barbados.

314. Según se preveía en su último informe a la Asamblea General, el Comité Especial celebró una nueva serie de sesiones en Africa en 1966. El Comité aceptó las invitaciones que le habían dirigido los Gobiernos de Argelia, Etiopía, la República Árabe Unida, la República Unida de Tanzania y Somalia, y celebró una serie de sesiones en sus respectivas capitales en los meses de mayo y junio. El Comité desea destacar en particular los interesantes resultados logrados por esas sesiones que no sólo pusieron de relieve la creciente preocupación de las Naciones Unidas por la situación de los pueblos coloniales, sino que reforzaron la propia capacidad del Comité para prestar asistencia a esos pueblos en su lucha por la libertad y la independencia. Además, la visita del Comité facilitó la comparecencia ante él de representantes de los movimientos de liberación nacional que deseaban expresar su parecer acerca del futuro de sus países, representantes que, de otro modo, no hubieran podido viajar a Nueva York.

315. El Comité Especial prestó prolongada atención a la cuestión de Rhodesia del Sur, cuya situación se agravó aún más por la declaración ilegal de independencia por parte del régimen de la minoría racista. El Comité tomó nota de declaraciones del Reino Unido en el sentido de que trataría de poner término a la rebelión sin demora y de prestar asistencia a la población del Territorio en sus deseos de un gobierno mayoritario y una sociedad sin opresión ni discriminaciones. No obstante, el Comité tomó nota de que las sanciones diplomáticas y económicas aplicadas contra Rhodesia del Sur por ese Gobierno no habían dado por resultado progreso alguno hacia esos fines. Además, las medidas adoptadas por la mayoría de los Estados Miembros en respuesta a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sólo habían tenido un efecto limitado sobre ese régimen, debido primordialmente a la negativa de los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal a adoptar las medidas correspondientes. Además, el Reino Unido, con la desaprobación del Comité, entabló conversaciones con ese régimen sin tener en cuenta las consecuencias nocivas que esas conversaciones podrían entrañar para los legítimos derechos de la población africana. En consecuencia, el Comité sostuvo la opinión ponderada de que era necesario que el Gobierno del Reino Unido adoptase medidas enérgicas, inclusive el uso de la fuerza, con objeto de dejar el camino expedito para positivos progresos en la aplicación de la Declaración a ese Territorio.

316. En cuanto a la cuestión del África Sudoccidental, la persistente inobservancia de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas por el Gobierno de Sudáfrica quedaba demostrada una vez más por su introducción de nuevas medidas legislativas represivas en aplicación de su política de apartheid. También había seguido adelante con el establecimiento de la infraestructura que se consideraba necesaria para crear "territorios patrios" con arreglo a las recomendaciones de la Comisión (Odendaal) de Encuesta sobre los asuntos del África Sudoccidental en 1962-1963. Además, el Comité Especial tomó nota con consternación de que el tan esperado fallo de la Corte Internacional de Justicia, emitido el 18 de julio de 1966, no se pronunció sobre las cuestiones jurídicas de fondo que se le habían sometido para que fallase sobre ellas. Aun reconociendo que las anteriores opiniones consultivas de la Corte, así como su fallo de 1962, no perdían nada de su fuerza, el Comité consideró que incumbía a

las Naciones Unidas lograr una solución política del problema. A este respecto, el Comité reafirmó que las disposiciones de la Declaración seguían siendo aplicables al África Sudoccidental y reiteró el derecho de la población del Territorio a la libre determinación y la independencia. Recomendó también que se pusiese término al Mandato y que las Naciones Unidas asumiesen simultáneamente la responsabilidad de la administración directa del Territorio con miras a la adopción de las providencias necesarias para celebrar elecciones sobre la base del sufragio universal de los adultos y a la concesión de la independencia plena.

317. En cuanto a los Territorios bajo administración portuguesa, la Potencia administradora, que sigue insistiendo en que son provincias de ultramar, adoptó nuevas medidas para su integración política, económica y administrativa con Portugal. Aprovechándose de la ayuda que le prestan algunos Estados, intensificó además sus operaciones militares contra la población africana de los Territorios. Amplió también la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento en gran escala de inmigrantes extranjeros y la exportación de trabajadores africanos a Sudáfrica. En vista de tales acontecimientos, el Comité Especial recomendó al Consejo de Seguridad que hiciera obligatoria para todos los Estados la aplicación de las medidas previstas en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General. El Comité siguió sustentando la opinión de que el Consejo de Seguridad debería adoptar las medidas necesarias para aplicar sus resoluciones relativas a esos Territorios.

318. Como resultado de los estudios especiales emprendidos por el Comité Especial sobre Rhodesia del Sur, el África Sudoccidental y los Territorios bajo administración portuguesa, el Comité tomó nota del prominente papel que en la vida económica de esos Territorios jugaban los intereses económicos y financieros internacionales. Fue motivo de inquietud para el Comité que esos intereses, confabulados en Yuesi, hayan servido para denegar a la población africana los medios de una participación efectiva en la vida económica de sus países. Por lo tanto, el Comité estimó que debieran incluirse urgentemente como tema del programa de la Asamblea General las actividades de esos intereses, que estaban impidiendo la aplicación de la Declaración tanto en estos como en otros territorios coloniales.

319. En lo que respecta a Adén, el Comité Especial lamentó que el Gobierno del Reino Unido no hubiera tomado las medidas necesarias para crear unas condiciones normales, inclusive el levantamiento del estado de emergencia, la derogación de las leyes restrictivas de las libertades públicas, la cesación de las actividades represivas, la liberación de los prisioneros políticos y el retorno de los exiliados. Un nuevo elemento en la situación — que ya era grave — relativa a los arrestos en masa y a la tortura de los prisioneros políticos fue también señalada a la atención del Comité Especial. También causó preocupación al Comité la posibilidad de que el Reino Unido transmitiese los plenos poderes al régimen no representativo existente en el Territorio y en condiciones que no se ajustaran a lo estipulado en la Declaración. Por consiguiente, solicitó del Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y la Potencia administradora, designara inmediatamente una misión especial para Adén, que tendría como encargo recomendar las medidas prácticas necesarias para

la plena aplicación de las correspondientes resoluciones de la Asamblea General y, concretamente, fijar la amplitud de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y fiscalización de las elecciones. Ha decepcionado al Comité que el Gobierno del Reino Unido, al propio tiempo que se manifestaba dispuesto a cooperar con una misión de las Naciones Unidas a los fines arriba señalados, hubiera formulado ciertas reservas sobre el particular, que han dado lugar a dificultades en cuanto respecta a la designación de la misión especial. El Comité siguió convencido de que cualquier esperanza que pudiera haber de detener la situación cada vez peor del Territorio residía en la aceptación incondicional de las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas por el Gobierno del Reino Unido y en su aplicación por éste con la plena cooperación de la Organización.

320. Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, que habían sido motivo de especial preocupación para el Comité Especial en años anteriores, fueron también objeto de amplio examen. El Comité, preocupado como en ocasiones anteriores por su situación económica y social nada satisfactoria, hizo un llamamiento, en vista de ello, a todos los Estados para que contribuyeran al Fondo para desarrollo económico creado por la Asamblea General. Ante la inminente independencia de Bechuania el 30 de septiembre y de Basutolandia el 4 de octubre, el Comité se ocupó urgentemente de las medidas necesarias para que esos países pudieran disfrutar de una independencia completa y para asegurar su integridad y soberanía territoriales. A más de pedir al Gobierno del Reino Unido que adoptara todas las medidas del caso, el Comité recomendó a la Asamblea General que dirigiera una seria advertencia al Gobierno de Sudáfrica contra cualquier menoscabo de la integridad y soberanía territoriales de los territorios y contra cualquier obstáculo al movimiento de personas y mercancías. Respecto a Swazilandia, el Comité mantuvo su opinión de que la Potencia administradora debiera adoptar medidas para procurar su acceso a la independencia en plena conformidad con la Declaración.

321. El Comité Especial prestó particular atención a los pequeños territorios, con respecto a los cuales también había habido lamentables demoras en la aplicación de la Declaración. En cuanto a la cuestión de las Islas Viti, el Comité Especial consideró que se deberían celebrar elecciones generales sobre la base del sufragio universal con el fin de formar una asamblea constituyente que se encargaría de redactar una constitución democrática. El Comité instó también al Gobierno del Reino Unido a que facilitase la formación de un gobierno representativo, el traspaso de plenos poderes a ese Gobierno y la fijación de una fecha cercana para la independencia del Territorio. Además, decidió designar un subcomité para que visitase las Islas Viti con el fin de estudiar directamente la situación del Territorio. Con respecto a Guinea Ecuatorial, el Comité apreció la cooperación del Gobierno de España al permitir al subcomité que visitara el Territorio. Sobre la base de las conclusiones del subcomité, el Comité decidió recomendar, entre otras cosas, que el Gobierno de España convocara una conferencia plenamente representativa del pueblo del Territorio, determinara las modalidades para traspasar todos los poderes al pueblo y fijara la fecha para la independencia que, conforme a los deseos del pueblo, debería ser a más tardar el mes de julio de 1968.

322. Con respecto a los territorios más pequeños, el Comité Especial reconoció que su reducido tamaño y escasa población, así como sus limitados recursos, presentaban problemas peculiares. Al mismo tiempo, el Comité expresó su firme opinión de que las disposiciones de la Declaración se aplicaban plenamente a esos territorios. En consecuencia, pidió a las Potencias administradoras encargadas de esos territorios que sin demora dieran la posibilidad a la población de expresar en completa libertad y sin restricción alguna su deseo sobre el futuro de sus países. A este respecto, el Comité expresó su creencia de que era conveniente la presencia de las Naciones Unidas mientras se ponía en práctica el derecho a la libre determinación. El Comité tomó también nota de la urgente necesidad de adoptar medidas para consolidar la base de la economía de esos territorios y promover su desarrollo social y económico. Con respecto a algunos de esos territorios, el Comité se mostró profundamente preocupado por los informes que indicaban que se estaban haciendo preparativos para utilizarlos con fines militares, así como por la falta de respeto para con su integridad territorial por parte de la Potencia administradora.

323. Basándose en su mandato, el Comité Especial insistió de nuevo en la importancia de enviar misiones visitadoras a los territorios más pequeños antes mencionados. En vista de que la información disponible sobre las condiciones en esos territorios y sobre las opiniones, deseos y aspiraciones del pueblo era insuficiente, el Comité reiteró su solicitud tendiente a que las Potencias administradoras prestaran su plena cooperación, permitiendo el acceso a los territorios bajo su administración. El Comité observó con pesar que las respuestas de las Potencias administradoras a su solicitud eran negativas o de carácter condicional. En consecuencia, el Comité estimó que la Asamblea General debería instarles de nuevo a que reconsiderasen su actitud en vista de la vital importancia que para su labor tenía el envío de misiones visitadoras.

324. El Comité tuvo que examinar también cuestiones relativas a una serie de territorios que eran objeto de reclamaciones contradictorias en materia de soberanía o que presentaban especial interés para algunos de los Estados Miembros por razones de carácter geográfico, histórico, económico o de otra índole. En esta categoría figuraban las Islas Malvinas (Falkland Islands), Somalia Francesa, Gibraltar e Ifni y el Sáhara Español. Como se observó en un informe anterior, el Comité opinó que las disposiciones de la Declaración se aplicaban plenamente a tales Territorios y que las controversias o intereses divergentes que pudieran existir con respecto a ellos deberían resolverse pacíficamente mediante transacción y buena voluntad.

L. TRABAJO FUTURO

325. Como se deduce de varios capítulos del presente informe, todavía queda un gran número de territorios coloniales que no han logrado la independencia. El Comité Especial estima que mientras los pueblos de todos los territorios restantes no puedan ejercer su derecho a la libre determinación e independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, ésta quizás desee que el Comité Especial continúe examinando la situación en cada uno de los territorios con miras a facilitar la aplicación de la Declaración tan pronto como sea posible.

326. A reserva de cualesquiera nuevas directivas que la Asamblea General pueda señalarle en su vigésimo primer período de sesiones, el Comité Especial se propone continuar buscando en 1967 los mejores medios y arbitrios para la aplicación inmediata y total de la Declaración con respecto a los territorios ya examinados. También se propone considerar los asuntos que, por falta de tiempo, no pudo estudiar debidamente.

327. Como ya se indicó en los párrafos 285 a 290 *supra*, el Comité Especial, al examinar los territorios, seguirá guiándose por los pedidos contenidos en los párrafos 8 y 9 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General. En esos párrafos, la Asamblea General pidió al Comité Especial que prestase particular atención a los territorios pequeños y que, en los casos apropiados, recomendase una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los territorios conforme a los deseos de su población.

328. En la sección de este capítulo relativa a las misiones visitadoras (párrs. 184 a 223 *supra*) y en muchos otros capítulos del presente informe relativos a determinados territorios, el Comité Especial ha formulado sus recomendaciones con respecto a las misiones visitadoras. De dichas recomendaciones se desprende claramente que el Comité Especial sigue atribuyendo un gran valor a esas visitas como medio de recoger información directa sobre la situación de los territorios y los deseos de la población, ayudando así a aplicar la Declaración. Por lo tanto, se propone perseverar con el mayor vigor en esas recomendaciones y seguir buscando la cooperación de las Potencias administradoras a fin de que dichas visitas puedan realizarse.

329. Además, considerando la utilidad y la importancia propias de las diversas reuniones celebradas por el Comité en África en años recientes, es posible que el Comité Especial celebre otra serie de reuniones en África.

330. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General respecto del programa de conferencias, el Comité Especial ha aprobado ya un calendario provisional que le permita realizar su programa de trabajo en 1967. En los párrafos 292 a 295 de este capítulo se detallan el calendario provisional y las decisiones conexas.

331. A fin de ayudarla a llevar a cabo sus trabajos en 1967, el Comité Especial desea proponer las siguientes recomendaciones que acaso la Asamblea General quiera incluir entre los asuntos que ha de considerar cuando examine la cuestión de la aplicación de la Declaración.

332. El Comité Especial estima que la Asamblea General debería renovar su llamamiento a las Potencias administradoras para que aplique sin más tardanza la Declaración sobre la concesión de la independencia en los Territorios coloniales que administran.

333. La Asamblea debería instar nuevamente a las Potencias administradoras a que cooperen con el Comité Especial facilitando las visitas a los territorios de conformidad con las solicitudes contenidas en resoluciones y decisiones ya aprobadas por el Comité Especial y con cualesquiera otras decisiones que a este respecto el Comité estime oportuno aprobar en el futuro.

334. La Asamblea debería pedir nuevamente a las Potencias administradoras que cooperen con el Secre-

tario General fomentando la divulgación en gran escala de la Declaración y de la información sobre el trabajo de las Naciones Unidas y, en particular, del Comité Especial, en la aplicación de la Declaración.

335. El Comité Especial recomienda que la Asamblea apruebe el programa de trabajo esbozado en esta sección así como disposiciones financieras adecuadas para sufragar los gastos que demandan las actividades del Comité, inclusive el costo de los grupos visitadores. Además, en el contexto del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 1654 (XVI) de la Asamblea General, es posible que el Comité Especial decida celebrar otra serie de sesiones en África. El Comité Especial estima que sus actividades en 1967 darán lugar a gastos del orden de los 250.000 dólares.

336. El Comité Especial estima que la Asamblea debería pedir al Secretario General que continuase suministrando al Comité Especial todos los servicios y el personal necesarios para el cumplimiento de su mandato.

M. APROBACIÓN DEL INFORME

337. El Comité Especial aprobó el presente informe, en conjunto, en su 483a. sesión, celebrada el 30 de noviembre de 1966.

ANEXO I

Párrafos 6 a 13 del informe del Subcomité III

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2069 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL, INCLUSO LA CUESTIÓN DE LAS MISIONES VISITADORAS

[Para el informe del Subcomité, véase más adelante el anexo al capítulo XXII.]

ANEXO II

[A/AC.109/L.318]

Informe del Subcomité II

Relator: Sr. C. R. GHAREKHAN (India)

INTRODUCCIÓN

1. En su 400a. sesión, celebrada el 4 de abril de 1966, el Comité Especial resolvió que el Subcomité II continuase con el mismo número de miembros, salvo la sustitución de Camboya por el Afganistán.

2. En su 42a. sesión, celebrada el 28 de abril de 1966, el Subcomité II eligió al Sr. Kadhim Khalaf (Irak) como Presidente y al Sr. C. R. Gharekhan (India) como Relator.

3. En su 43a. sesión, celebrada el 5 de mayo, el Subcomité decidió considerar primero la cuestión de las misiones visitadoras a los Territorios de que se ocupa el Subcomité, y después examinar aquéllos por el siguiente orden: Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn, Islas Salomón, Nuevas Hébridas, Samoa Americana, Guam, Niue, Islas Tokelau, Islas Cocos (Keeling), Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, Territorio en fideicomiso de Nauru, Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea (y el Territorio de Papua), Brunéi y Hong Kong.

MISIONES VISITADORAS

Examen de la cuestión por el Subcomité

4. El Subcomité examinó la cuestión de enviar misiones visitadoras a los Territorios de que se ocupa, en sus sesiones

44a., 45a., 46a., 47a. y 48a., celebradas el 12 de mayo, el 19 de julio y el 2, 8 y 9 de agosto.

5. En cuanto a las opiniones de las Potencias administradoras sobre el envío de misiones visitadoras a sus Territorios, el Subcomité recibió la información siguiente.

6. El representante del Reino Unido dijo que el envío de misiones visitadoras a los Territorios administrados por el Reino Unido planteaba difíciles cuestiones de principio y que él no podía alentar al Subcomité a esperar que cambiase la posición actual de su Gobierno. Sin embargo, su delegación estaba dispuesta a transmitir a su Gobierno toda solicitud de información relativa al envío de esas misiones a determinados Territorios, aunque esto no podía interpretarse como compromiso implícito de que tal petición fuese aceptada.

7. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que, si el Subcomité proponía enviar una misión visitadora a Guam y a Samoa Americana en 1966, el Gobierno de los Estados Unidos probablemente no consideraría que la situación justificase ese viaje; en efecto, los Territorios administrados por los Estados Unidos progresaban rápidamente hacia la autonomía y no deberían constituir un problema urgente para el Comité Especial cuando prepare su recargado programa de trabajo para el año.

8. El representante de Australia declaró que el envío de misiones visitadoras podía justificarse en ciertas circunstancias. Sin embargo, dudaba de que esto rigiese para las misiones del Comité de los Veinticuatro que visitasen Territorios australianos, que habían sido objeto de intenso escrutinio por las Naciones Unidas durante muchos años, por lo que la Organización conocía muy bien todos los aspectos del desarrollo en aquellas regiones. Parte de ese escrutinio lo realizaron misiones visitadoras procedentes del Consejo de Administración Fiduciaria.

9. No obstante, la actitud de su Gobierno obedecía considerablemente al hecho de que, por lo mismo que una Autoridad Administradora tenía deberes en los Territorios a su cargo, también tenía derechos, entre ellos el de aceptar o no el envío de una misión visitadora.

10. Su Gobierno no podía consentir *in vacuo* a la visita de una misión, y en todo momento tendría que estudiar, en relación con cualquier petición concreta, factores como la oportunidad concreta de la época propuesta para la visita, la conveniencia del Gobierno australiano, la conveniencia de la Administración del Territorio y la composición de cualquier misión que se propusiere. Estas consideraciones, en cualquier momento dado, estarían sin duda condicionadas también por opiniones particulares que su Gobierno tuviese, por ejemplo, respecto de los fondos de las Naciones Unidas entrañados en cualquier propuesta concreta, y por el hecho de si existía duplicación o superposición de esfuerzos de las Naciones Unidas.

11. Por ello, su Gobierno no podía en esos momentos contraer compromiso alguno de atender solicitudes que se le hiciesen de recibir a misiones visitadoras, pero su delegación estaba dispuesta a transmitir a su Gobierno toda petición concreta que hiciesen el Comité o el Subcomité en cualquier momento.

12. En carta de fecha 1º de agosto de 1966, el representante de Nueva Zelandia expuso que su Gobierno no tenía objeción alguna que oponer a esa misión, aunque estimaba que cualquier visita de una misión de las Naciones Unidas a Niue y a las Islas Tokelau sólo debiera realizarse como parte de un viaje más extenso por la región.

13. El representante de Francia informó al Subcomité de que su Gobierno no alentaba el envío de una misión visitadora a las Nuevas Hébridas.

14. Los representantes de la India, Chile, Irak y Polonia declararon que apoyaban recomendar al Comité Especial que

se enviase misiones visitadoras a los Territorios de que se ocupaba el Subcomité.

15. El Subcomité, teniendo en cuenta las observaciones de varios miembros, convino en hacer una recomendación al Comité Especial sobre el envío de misiones visitadoras a los Territorios de que se ocupaba el Subcomité.

Recomendaciones del Subcomité

16. El Subcomité recomienda que el Comité Especial invite a las Potencias administradoras a recibir a misiones visitadoras en los Territorios de que se ocupaba el Subcomité II. Más adelante, el Subcomité hará recomendaciones sobre los Territorios que se deben visitar y las fechas de las visitas.

CAPÍTULO II*

REUNIONES CELEBRADAS EN AFRICA

INTRODUCCIÓN

1. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, el Comité Especial mencionó la posibilidad de celebrar en 1966, como parte de su programa para dicho año, otra serie de reuniones en África, en vista de la gran importancia de la obra realizada gracias a sus visitas anteriores a África. Este programa fue aprobado por la Asamblea General en el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX). Dentro del contexto del programa aprobado, los Gobiernos de la República Unida de Tanzania, la República Árabe Unida, Etiopía, Somalia y Argelia invitaron al Comité Especial (A/AC.109/147 a 150 y 152) a reunirse en 1966 en sus respectivas capitales.

2. En el curso del debate sobre la organización de los trabajos, que tuvo lugar en las reuniones celebradas entre el 8 de marzo y el 6 de mayo de 1966, gran parte de los miembros del Comité apoyó la celebración de una serie de reuniones en África. Varios miembros manifestaron que estas reuniones permitirían a los miembros del Comité estudiar de cerca la situación de ciertos territorios, así como la actitud de las Potencias administradoras interesadas y la medida en que se habían aplicado las disposiciones de las resoluciones anteriores. Además, facilitarían la aparición ante el Comité de peticionarios a quienes les sería imposible hacerlo en otras circunstancias por no poder trasladarse a Nueva York.

3. En su 400a. sesión celebrada el 4 de abril de 1966, el Comité Especial estudió y, tras un debate, aprobó por 20 votos contra ninguno y 3 abstenciones una recomendación sobre el particular, que fue incluida en el 22º informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.265/Rev.1). Al aprobar esta recomendación, el Comité decidió celebrar una serie de reuniones en África durante 1966 y viajar a África con ese objeto, a más tardar a mediados de mayo.

4. En sus sesiones 408a. y 409a., celebradas el 26 de abril, el Comité Especial examinó nuevas recomendaciones sobre el particular, que figuraban en los informes 23º y 24º del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.270 y 275). El Comité también tuvo a la vista un informe del Secretario General sobre las consecuencias administrativas y financieras de las recomendaciones del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.271). En su 409a. sesión, el Comité decidió aprobar los informes del Grupo de Trabajo, en la inteligencia de que se harían constar las reservas expresadas por algunos miembros. Al aprobar estos informes, el Comité decidió aceptar

las invitaciones de los cinco Gobiernos y que las reuniones que se celebraran en África no durarían más de seis semanas. Al mismo tiempo, el Comité decidió que estas reuniones empezaran en Dar es Salaam, República Unida de Tanzania, el 23 de mayo de 1966, y luego, y según conviniera a los Gobiernos de Somalia, Etiopía, la República Árabe Unida y Argelia, se celebrarían reuniones en Mogadiscio, Addis Abeba, El Cairo y Argel respectivamente. Algunos miembros expresaron reservas acerca de la duración de la visita y del número de capitales que se debían visitar.

5. Al adoptar estas decisiones, el Comité Especial tuvo en cuenta una declaración del Presidente, formulada en la misma sesión, en la cual expuso las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a los temas que se debían estudiar en las diversas capitales, con la venia de los Gobiernos invitantes. Esas recomendaciones preveían lo siguiente:

Dar es Salaam: Rhodesia del Sur, Mozambique, Basutolandia, Bechuania y Swazilandia;

Mogadiscio: Somalia Francesa, Isla Mauricio e Islas Seychelles;

Addis Abeba: África Sudoccidental, Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, Ifni, Sáhara Español y Somalia Francesa;

El Cairo: Adén y Omán;

Argel: Angola, Guinea Portuguesa, Santo Tomé y Príncipe y dependencias, Archipiélago de Cabo Verde, Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni).

El presidente también comunicó al Comité que, al formular estas recomendaciones, el Grupo de Trabajo proponía que se diera más importancia a las audiencias de peticionarios que al examen del fondo de las cuestiones mencionadas *supra*.

6. En una carta de fecha 7 de mayo de 1966 (A/AC.109/159) dirigida a las Naciones Unidas por el Representante Permanente del Reino Unido, se informaba al Presidente del Comité Especial que el Gobierno del Reino Unido no podría estar representado en el Comité cuando éste celebrara sus reuniones en África. En la carta también se dirigía una invitación a los miembros del Comité para que celebraran conversaciones oficiosas en Londres con los representantes del Gobierno del Reino Unido con motivo de su viaje a Dar es Salaam. Tras un debate sobre la carta, celebrado en la 411a. sesión, el 13 de mayo de 1966 el Presidente del Comité Especial envió una respuesta al Representante Permanente del Reino Unido en la que le comunicaba que la mayoría de los miembros había expresado su pesar ante la perspectiva de que el Reino Unido no participara en las reuniones que

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300 (parte II).

el Comité iba a celebrar en Africa, y le dirigía un llamamiento para que reconsiderase su decisión. El Presidente también comunicó al Reino Unido que el itinerario del Comité no disponía que el viaje se hiciera pasando por Londres, por lo que, desgraciadamente, no habría ocasión de celebrar en esa capital las conversaciones propuestas (A/AC.109/160). En su respuesta de fecha 17 de mayo de 1966, el Representante Permanente del Reino Unido comunicó al Presidente que el Gobierno del Reino Unido había llegado a la decisión de no participar en las reuniones del Comité Especial en Africa tras un detenido examen de todas las cuestiones implicadas, por lo que le resultaba imposible modificar esa decisión (A/AC.109/162).

7. En un telegrama de fecha 3 de junio de 1966, el Representante Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas comunicó al Presidente del Comité Especial que, por razones ajenas a su voluntad, la delegación del Uruguay no podría participar en los debates del Comité Especial durante su visita a Africa. Manifestó su apoyo a la labor del Comité y su gratitud a los Gobiernos invitantes por su invitación (A/AC.109/173).

8. El 14 de mayo de 1966 el Presidente del Comité Especial publicó, en nombre del Comité, un comunicado sobre las reuniones en Africa que recibió gran publicidad en los cinco países huéspedes. El texto del comunicado figura en un apéndice al presente capítulo (apéndice I).

9. Los miembros del Comité Especial¹, acompañados por el representante del Secretario General y por otros miembros de la Secretaría, llegaron a Dar es Salaam, el 22 de mayo de 1966. El Comité Especial se reunió en dicha ciudad del 23 al 31 de mayo de 1966 en Msimbazi Community Centre; llegó a Mogadiscio el 1º de junio y celebró reuniones del 2 al 4 de junio de 1966 en el edificio del Parlamento; llegó a Addis Abeba el 5 de junio y se reunió del 6 al 9 de junio de 1966 en el Africa Hall; llegó a El Cairo el 10 de junio y celebró reuniones del 11 al 15 de junio de 1966 en la sede de la Liga de los Estados Arabes; y llegó a Argel el 17 de junio y se reunió del 17 al 22 de junio de 1966 en la sala de conferencias del Club-des-Pins.

10. Durante su visita a Africa, el Comité Especial celebró 40 sesiones plenarias y el Subcomité de Peticiones celebró 12 reuniones. El Comité Especial escuchó a 32 grupos de peticionarios y distribuyó 39 peticiones escritas en las que no estaban incluidas las peticiones de audiencia.

11. Al iniciar sus reuniones en Dar es Salaam, Mogadiscio, Addis Abeba, El Cairo y Argel, respectivamente, el Comité Especial escuchó las intervenciones del Excelentísimo señor Rashidi Kawawa, segundo Vicepresidente, en nombre del Presidente de la República Unida de Tanzania, del Excelentísimo señor Hagi Hussein Abdirizak, Primer Ministro, en nombre del Presidente de Somalia, del Excelentísimo señor Ketema Yifru, Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de Su Majestad Imperial el Emperador de Etiopía, del Excelentísimo señor Mahmoud Riad, Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del Presidente de la República Árabe Unida, y del Excelentísimo señor Abdelaziz Bouteflika, Ministro de Relaciones Exteriores,

en nombre del Presidente del Consejo Revolucionario y Jefe del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular. El Comité Especial también tuvo el honor de ser recibido por el Jefe de Estado o de Gobierno en cada una de las cinco capitales.

12. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Especial en su 403a. sesión varios representantes de la Organización de la Unidad Africana (OUA) asistieron a las reuniones del Comité en Dar es Salaam y Addis Abeba en calidad de observadores. El 17 de mayo de 1966 el Secretario General Administrativo de esa Organización envió al Presidente una carta en la que daba la bienvenida a Africa al Comité y le ofrecía la colaboración y asistencia de su Organización (A/AC.109/165). En cumplimiento de la decisión adoptada por el Comité en su 440a. sesión, celebrada el 11 de junio de 1966, de acceder a una solicitud dirigida al Presidente por el Secretario General interino de la Liga de los Estados Arabes (A/AC.109/182), un representante de esa Organización asistió a las reuniones del Comité en El Cairo a título de observador.

13. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Especial en su 424a. sesión celebrada el 30 de mayo de 1966, de acceder a la petición dirigida al Presidente en nombre del Gobierno de Checoslovaquia (A/AC.109/164 y 166), un representante de este Gobierno asistió a las reuniones celebradas en Africa a título de observador. En virtud de otras decisiones adoptadas por el Comité en sus sesiones 428a. y 433a., celebradas el 2 y el 6 de junio de 1966, respectivamente, y relativas a las solicitudes que le fueron presentadas en nombre del Gobierno de Somalia (A/AC.109/169 y Add.1), una delegación de ese Gobierno asistió a las reuniones del Comité Especial en Mogadiscio y Addis Abeba en calidad de observadora. Además, en conformidad con la decisión adoptada por el Comité en su 440a. sesión, celebrada el 11 de junio de 1966, de acceder a una petición análoga del Gobierno de la República Árabe Unida (A/AC.109/180), un representante de dicho Gobierno asistió a las reuniones en El Cairo en calidad de observador. Finalmente, los representantes de los Gobiernos de Argelia y de España asistieron a las reuniones celebradas en Argel en calidad de observadores, en virtud de la decisión adoptada por el Comité en su 448a. sesión, celebrada el 17 de junio de 1966, de acceder a las peticiones que estos Gobiernos le habían formulado (A/AC.109/184 y 185).

14. En la 426a. sesión, celebrada el 31 de mayo de 1966, el representante de Checoslovaquia, con el consentimiento del Comité Especial, hizo una declaración sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. En las sesiones 428a. y 430a., celebradas el 2 y 3 de junio de 1966, el representante de Somalia, en virtud de una decisión adoptada por el Comité respecto de una petición presentada por el Gobierno de Somalia (A/AC.109/172), participó en el examen de la cuestión de Somalia Francesa. En las sesiones 435a. y 436a., celebradas el 7 de junio de 1966, los representantes de Mauritania y de Marruecos, de conformidad con las decisiones del Comité de acceder a las peticiones formuladas en nombre de sus Gobiernos respectivos (A/AC.109/174 y 175), participaron en las deliberaciones sobre Ifni y el Sáhara Español. El representante de España, a cuya solicitud de que se le permitiera participar en estas deliberaciones (A/AC.109/176) accedió el Comité en su 435a. sesión, envió ulterior-

¹ En el anexo II a este capítulo figura una lista de los representantes que asistieron a las reuniones celebradas en Africa.

mente una carta por la que retiraba su solicitud (A/AC.109/176/Add.1). En las sesiones 441a. a 447a., celebradas entre el 11 y el 15 de junio de 1966, el representante de la República Árabe Unida, en virtud de la decisión del Comité de acceder a una petición formulada en nombre del Gobierno de dicho representante (A/AC.109/181), participó en las deliberaciones relativas a las cuestiones de Adén y de Omán. Por último, en las sesiones 451a., 452a. y 454a., celebradas el 20 y el 21 de junio de 1966, el representante de España, de conformidad con una decisión adoptada por el Comité en relación con una solicitud presentada en nombre del Gobierno español (A/AC.109/185), participó en las deliberaciones sobre la cuestión de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni).

15. Tras el examen de los temas pertinentes, el Comité Especial aprobó resoluciones sobre las cuestiones de Rhodesia del Sur (cap. III, párr. 1097), África Sudoccidental (cap. IV, párr. 306), Basutolandia, Bechuanalandia y Swazilandia (cap. VII, párr. 237), Adén (cap. VI, párr. 382), Guinea Ecuatorial (cap. IX, párr. 79), y los territorios bajo administración portuguesa (cap. V, párr. 675), así como un consenso relativo a la cuestión de Ifni y del Sáhara Español (cap. X, párr. 116). En los capítulos III, VII, IX y X del presente informe figura una relación del examen de todas estas cuestiones por el Comité Especial.

16. En cuanto a la cuestión de Somalia Francesa, el Comité Especial decidió en su 432a. sesión, celebrada el 4 de junio de 1966, que después de las audiencias de peticionarios y de escuchar las declaraciones de los representantes, daría fin al examen del tema cuando reanudara sus sesiones en Nueva York. Respecto de la Isla Mauricio y de las Islas Seychelles, el Comité decidió, a propuesta del Presidente en la 447a. sesión, el 15 de junio de 1966, aplazar su examen hasta la reanudación de sus sesiones en Nueva York. En cuanto a la cuestión de Omán, el Comité también decidió en la misma reunión que, después de escuchar a los peticionarios, aplazaría el examen de la cuestión hasta la reanudación de sus sesiones en Nueva York.

17. Teniendo presentes las deliberaciones sobre los temas ya mencionados, el Comité Especial también aprobó una resolución relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo que respecta a los territorios coloniales por él considerados en África en 1966 (véase el párrafo 619 *infra*). También aprobó por aclamación una resolución en la que expresaba su agradecimiento a los Gobiernos invitantes (véase el párrafo 626, *infra*).

A. REUNIONES CELEBRADAS EN DAR ES SALAAM, REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA

Apertura de las reuniones

Discurso del Segundo Vicepresidente en nombre del Presidente de la República Unida de Tanzania

18. El Segundo Vicepresidente de la República Unida de Tanzania saludó a los miembros del Comité en nombre del Presidente y del Gobierno de Tanzania y dijo que su país consideraba que la actividad del Comité Especial era esencial para la obra de las Naciones Unidas. Añadió que algunos estimaban que el Comité era menos importante que otros órganos de las Naciones Unidas interesados directamente en los

asuntos de la paz y la guerra, pero los tanzanos reconocían plenamente la importancia de ese comité, que se ocupaba en el colonialismo y, en consecuencia, en el principio de la igualdad de los hombres en el mundo y de las consiguientes amenazas a la paz y al orden universal. Los africanos estaban convencidos de que era imposible la paz fundada en la injusticia del colonialismo. Ningún pueblo aceptaría que lo gobernara eternamente otro pueblo y los africanos, por consiguiente, recurrirían a las armas en caso necesario para conseguir su libertad. La función del Comité era tratar de evitar la necesidad de luchar procurando que los pueblos de cada nación se gobiernan conforme a sus propios deseos y necesidades. Declaró que los miembros del Comité deberían, pues, trabajar para que el Comité dejase de ser necesario.

19. Manifestó que estaba en total desacuerdo con los que opinaban que el Comité gastaba el dinero inútilmente al viajar a África puesto que no podía visitar los propios territorios coloniales.

20. En los países más evolucionados y desarrollados de Europa y América no se entendía la profunda aspiración de los africanos a la independencia sin ninguna injerencia extranjera. Pero en África el Comité no podía dejar de comprender toda la importancia de sus actividades, pues encontraría personas que tenían que hacer frente diariamente a las consecuencias del colonialismo y a tanzanos que, con recursos inadecuados, procuraban proteger sus fronteras contra las fuerzas coloniales de Portugal. El Comité Especial vería asimismo a muchos refugiados políticos que habían huido del colonialismo y los oíría en su propio ambiente, lo que le permitiría juzgar más fácilmente de la sinceridad de sus convicciones. Aunque el Comité no pudiera visitar los propios territorios coloniales, había tal unidad en la historia y en las tradiciones de África que si se comprendiera bien la situación en los países africanos que acababan de lograr la independencia se tendría una base excelente para entender la realidad de un colonialismo que se prolongaba.

21. Desde la visita anterior del Comité Especial la lucha contra el colonialismo en África había hecho muy pocos progresos y la causa de la justicia y la humanidad había sufrido un terrible retroceso. No podía permitirse que continuase ese estado de cosas y no se lo había de remediar sólo con palabras. El Comité Especial había ido a escuchar a los peticionarios; luego aprobaría resoluciones e informaría al órgano de que dependía. Si no ocurría nada más, no se habría hecho ningún progreso y la situación empeoraría con el transcurso del tiempo. Era necesario que se adoptaran medidas, porque el colonialismo era un absceso que envenenaba todo el cuerpo mientras subsistía.

22. Los Estados africanos se estaban recobrando de un período en el cual se humilló a sus pueblos y se les negó el derecho más elemental a prepararse para servir eficazmente a sus países. Los africanos se veían obligados a ir aprendiendo en la práctica las artes de la administración y del desarrollo económico, ya que antes de la independencia otros decidían sus destinos por ellos y la formación que recibían tendía a convertirlos en buenos ingleses, buenos franceses o buenos belgas. Los africanos habían tenido que eliminar ese veneno de su sociedad al mismo tiempo que exigían de su población una actividad muy superior a la que se precisaba en los países desarrollados.

23. Los africanos no deseaban verse obligados a recurrir a las armas. Querían que África fuese libre para poder vivir en buenas relaciones con todo el mundo y querían que las autoridades coloniales traspasaran ordenadamente el poder a los pueblos de los Estados interesados.

24. Los africanos tendrían mucha paciencia, siempre que las Potencias coloniales reconocieran formalmente el principio de que todos los Estados que se hallaban bajo su poder llegarán a ser Estados independientes con un gobierno mayoritario. Pero si no se reconocía dicho principio y si no se comenzaba a preparar el traspaso del poder, los africanos se verían obligados a prepararse para una guerra de liberación. Abrigaban la esperanza de que los trabajos del Comité contribuirían a que ningún pueblo africano se viera obligado a recurrir a las armas.

25. Celebró la próxima independencia, en 1966, de los Territorios británicos de Bechuania y Basutolandia, pero dijo que deseaba que el Comité se asegurase de que habría realmente un traspaso del poder. Si las Naciones Unidas se declaraban satisfechas con la situación, los tanzanios felicitarían a esos pueblos y al Comité por la nueva independencia conquistada en África.

26. Pero esos países estaban casi completamente rodeados por la República de Sudáfrica. El Comité y las Naciones Unidas en general deberían, pues, estar alertas y velar para que esos países conservaran su soberanía. Aunque la situación de Sudáfrica no interesaba directamente al Comité, estaba relacionada con toda discusión relativa a la parte meridional de África. La vía que siguiera el África Sudoccidental para obtener la libertad dependería en gran medida de la opinión consultiva que emitiría próximamente la Corte Internacional de Justicia y de las medidas que adoptara posteriormente el Consejo de Seguridad. Pero ningún miembro del Comité podía dudar de que el África Sudoccidental estaba sometida a una verdadera opresión ni de que se debería poner fin a esa situación. El Comité Especial tenía el deber de procurar que la transición hacia la libertad fuese constructiva y no destructiva.

27. El problema de los Territorios portugueses interesaba directamente al Comité, el cual debería hacer que el mundo comprendiera dos cosas: que el colonialismo portugués sólo seguía existiendo gracias al apoyo que Portugal recibía de sus aliados en Europa y que, por consiguiente, todas las relaciones entre África y Europa serían afectadas por la forma en que se desarrollara la lucha por la libertad en las colonias portuguesas.

28. En todos los territorios coloniales a que se había referido el orador la situación era igual a la que reinaba cuando el Comité hizo su visita anterior a África, o un poco mejor.

29. Pero en Rhodesia del Sur, evidentemente, la situación había empeorado mucho. Tanzania deseaba que Rhodesia del Sur se independizara, pero a condición de que fuese gobernada por la mayoría. Había apelado al Gobierno del Reino Unido para que pusiera fin al régimen ilícito y se comprometiera a que Rhodesia del Sur sólo obtuviera la independencia si el poder pasaba a manos de la mayoría. En vista de las obligaciones asumidas por todos los Miembros de las Naciones Unidas, Tanzania no creía que esas demandas fueran des-

medidas. Pero no se las había cumplido y nada permitía pensar que se las cumpliría. En vez de ello el Reino Unido había adoptado un número creciente de sanciones económicas al mismo tiempo que invitaba al resto del mundo a no comerciar con el gobierno ilegal. Sólo después de cinco meses se había pedido a las Naciones Unidas que autorizaran la adopción de verdaderas medidas, y aun así sólo se aplicaban a un envío de petróleo a un puerto determinado. Los africanos no habían recibido más seguridades que las de una actividad diplomática intensa, en la cual se había pedido al Gobierno racista de Sudáfrica y al Gobierno colonialista de Portugal que cooperaran con las autoridades del Reino Unido. Su buena voluntad quedaba demostrada por el hecho de que seis meses después de la declaración unilateral de independencia el régimen de Smith continuaba en el poder. Otro hecho grave era que la única seguridad que se había recibido del Gobierno del Reino Unido era la de que sólo concedería una independencia basada en el gobierno de la mayoría.

30. Añadió que no pensaba que a los africanos les importara cómo fuese derrocado el régimen de Smith, que por cierto había caído el 11 de noviembre de 1965 si el Gobierno del Reino Unido hubiese enviado tropas para hacer respetar su autoridad soberana. Pero si el Reino Unido se negaba a sofocar la rebelión, era indudable que las Naciones Unidas deberían entonces adoptar las medidas del caso sin tener en cuenta los deseos del Reino Unido. En virtud del Capítulo VII de la Carta el Consejo de Seguridad podía obligar a todos los Estados Miembros a imponer sanciones económicas. Si algunos de esos Estados se negaban a cooperar, las sanciones se aplicarían también a ellos. Los africanos no podían aceptar que cuatro millones de personas quedaran bajo el control de una minoría blanca, racista y privilegiada, y tendrían que extirpar a cualquier precio ese brote de opresión en África.

31. Para terminar, el orador expresó la esperanza de que el Comité tuviera oportunidad de ver algunas de las dificultades con que tropezaba Tanzania y los grandes esfuerzos que hacía su población para superarlos. También esperaba que los miembros del Comité percibieran en cierta forma el entusiasmo y la voluntad de vencer las dificultades que inspiraba el desarrollo de un país independiente, pues esos sentimientos eran un rasgo de la vida diaria en Tanzania. Estaba convencido de que si el Comité se compenetraba bien de esos factores comprendería mejor la importancia de sus trabajos y podría tal vez hallar un medio de vencer el colonialismo.

Declaraciones generales

32. El Presidente dio las gracias a Su Excelencia, el Sr. Kawawa, por su muy importante discurso. Dijo que el Comité Especial estaba particularmente agradecido al Vicepresidente por sus cordiales palabras de bienvenida y había quedado profundamente conmovido por la hospitalidad y la amistad que se le había demostrado desde su llegada a Dar es Salaam. También dio las gracias al Vicepresidente por haber afirmado que apoyaría los trabajos del Comité.

33. Estimaba que la hermosa ciudad de Dar es Salaam, que había dado un ejemplo brillante en las luchas africanas de liberación, era un lugar sumamente apropiado para iniciar los trabajos del Comité en África. Los progresos hechos por Tanzania desde su indepen-

dencia habían inflamado la imaginación de todos los hombres de buena voluntad.

34. El Presidente reiteró su agradecimiento al Vicepresidente por haber accedido a abrir el período de sesiones a pesar de sus muchas ocupaciones, y expresó la esperanza de que los esfuerzos contribuyeran en forma significativa a la liquidación de los últimos baluartes del colonialismo, problema que preocupaba profundamente a África y a las Naciones Unidas.

35. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en nombre del pueblo, de la delegación y del Gobierno soviético, agradeció al Gobierno y al pueblo de Tanzania su acogida fraternal. Añadió que la República Unida de Tanzania era un país joven, valiente y geográficamente cercano a los territorios donde todavía se hacían sentir las consecuencias del colonialismo. Manifestó su satisfacción por la importante alocución del Vicepresidente Kawawa, y rindió homenaje al valor y al dinamismo de esta joven nación africana que luchaba, junto con otros gobiernos hermanos, para liberar a los que seguían oprimidos en Sudáfrica, en Rhodesia del Sur, en los territorios bajo dominación portuguesa y en los protectorados ingleses. La tempestad provocada por los movimientos de liberación debía continuar, ya que infortunadamente todavía quedaban muchos territorios africanos donde seguían manifestándose las consecuencias del colonialismo. Los monopolios instalados en el Sur de África sólo procuraban enriquecerse y por eso mantenían el racismo. Por lo tanto, los monopolios internacionales que se beneficiaban de ese enriquecimiento eran igualmente culpables puesto que prolongaban una situación inadmisiblemente. Los países miembros de la OTAN que sostenían a Salazar facilitándole aviones, armas, instructores y suministros industriales ayudaban de esa manera a los regímenes racistas. En la última Asamblea General se adoptaron decisiones importantes contra el colonialismo y el imperialismo: los monopolios internacionales que coartaban la libertad de los territorios que no habían obtenido aún su independencia habían sido juzgados con severidad. El Comité Especial, emanación del deseo de libertad de los pueblos, debería buscar todos los medios adecuados para lograr la independencia de los pueblos oprimidos y tomar decisiones enérgicas que pudieran ser rápidamente aplicadas. Los procedimientos y los métodos que seguiría el Comité Especial para aplicar esas decisiones serían elegidos en función de cada problema particular. El Comité debería consagrar principalmente sus esfuerzos a cuestiones como la aplicación más rápida de la Declaración de descolonización; la concesión de una ayuda verdadera a los pueblos que luchaban por la independencia, la participación de los organismos especializados de las Naciones Unidas en estos esfuerzos, la fijación de plazos máximos para la concesión de la independencia a los territorios coloniales, etc.

36. Por otro lado, el Comité Especial debería dedicar particular atención a la utilización por los países coloniales de bases militares contra los pueblos, en particular de la Isla de la Ascensión contra el pueblo del Congo, de la Isla de Guam contra el pueblo de Vietnam, etc. Convenía adoptar medidas positivas y constructivas para poner fin a esos actos de agresión.

37. El representante de la Unión Soviética condenaba la afirmación de que el Comité Especial no tenía nada que hacer en África, y estaba persuadido, por el contrario, de que su presencia allí daría nuevo ímpetu

a la lucha emprendida. La Unión Soviética, Estado socialista, había eliminado la esclavitud del hombre por el hombre, había suprimido las clases sociales y defendería, como siempre lo había hecho hasta la fecha, a los que luchaban por su libertad y eran víctimas de la política de los imperialistas. La Unión Soviética apoyaría a los combatientes de la libertad por todos los medios a su alcance; exigía la independencia de todos los territorios bajo la dominación extranjera y estaría a su lado para liberar definitivamente al continente africano.

38. Las Naciones Unidas tenían que imponer sanciones contra Sudáfrica y Rhodesia del Sur para obligarlas a someterse a las decisiones de la Asamblea General.

39. El representante de la India expresó al Gobierno de la República Unida de Tanzania, en nombre de su delegación y en el suyo propio, la gratitud y el reconocimiento de su Gobierno por la generosa invitación hecha al Comité Especial para que celebrara alguna de sus sesiones en Dar es Salaam. Los miembros sentían la cordialidad y el afecto del pueblo amigo de Tanzania, por cuya prosperidad y bienestar duraderos su delegación formulaba los mejores votos.

40. Declaró que Tanzania, rodeada de varios territorios no autónomos, ocupaba una posición única en la valiente lucha contra el colonialismo y tenía un papel de importancia que desempeñar: ayudar a los que luchaban por la libertad de esos territorios. La delegación de la India estaba sumamente satisfecha con la contribución que Tanzania había hecho y estaba haciendo a esa digna causa. El hecho de que la sede del Comité de Liberación de los Once de la Organización de la Unidad Africana estuviese ubicada en Dar es Salaam, constituía en sí una prueba de que se reconocía la posición especial de Tanzania. La delegación de la India quería rendir tributo a una de las personalidades más destacadas de África, Su Excelencia Mwalimu Julius K. Nyerere, Presidente de la República, y también a su Gobierno y a su pueblo.

41. Añadió que la India disfrutaba de cordialísimas relaciones con Tanzania y tenía en gran estima al Sr. Nyerere por sus cualidades de dirigente, por sus abnegados esfuerzos para elevar el nivel de vida de su pueblo y por el éxito que había logrado al crear una sociedad verdaderamente multirracial. Según la expresión del Sr. A. M. Babu, Ministro de Comercio y Cooperación de Tanzania, la firma del Acuerdo de Amistad y de Cooperación en materia científica, económica y técnica entre Tanzania y la India, constituía "no el principio sino la continuación de las relaciones amistosas que existen desde hace mucho tiempo entre la India y Tanzania". La India se enorgullecía del tributo del Sr. Babu, quien había dicho que con su cooperación la India estaba ayudando no sólo al desarrollo económico de Tanzania sino también a la emancipación económica del África colonial.

42. En su inspirada alocución, el segundo Vicepresidente había recordado al Comité Especial el carácter siempre urgente del problema del colonialismo. Las esclarecidas palabras del Sr. Kawawa guiarían al Comité en sus deliberaciones. La actitud de la India frente al colonialismo había sido siempre inmutable y muy clara. La India siempre había defendido el derecho de los pueblos que habían estado privados de su libertad en diferentes períodos de su historia a emanciparse de la sujeción a que les habían sometido las Potencias extran-

teras. La India continuaría mostrando la misma sinceridad intransigente, sin temor y sin miras interesadas. La conciencia y los principios de su pueblo no estaban en venta.

43. Declaró que su delegación lamentaba profundamente que el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte estuviese ausente del Comité Especial. En vista de que el Reino Unido había aceptado claramente los principios que eran la base misma del mandato del Comité Especial, hubiera sido preferible que su representante hubiese continuado participando en las deliberaciones del Comité.

44. El representante de Malí dio las gracias al Gobierno y al pueblo de la República Unida de Tanzania por su acogida tan cordial y tan africana. Agradeció también al Vicepresidente Kawawa su alocución y el interés de su Gobierno en los trabajos y los objetivos del Comité Especial. Recordó que la resolución 1514 (XV) aprobada en 1960 por la Asamblea General, había despertado una esperanza nueva: la de la rápida liberación de millones de seres humanos que todavía vivían bajo el yugo del colonialismo y del imperialismo. El Comité Especial había hecho recomendaciones a las Potencias coloniales con la intención de poner en práctica la resolución 1514 (XV); pero ya había pasado el momento de las declaraciones de principio. El Comité Especial tenía que decidir qué medidas concretas se habían de adoptar para apresurar la independencia de los territorios no independientes, conforme a la resolución 2105 (XX). Malí, por su parte, sugería lo siguiente: Primero, que se concediera audiencia a los peticionarios de los movimientos nacionales de liberación, puesto que en la mayoría de los casos esos peticionarios no podían trasladarse a Nueva York; segundo, que se creasen grupos de trabajo sobre las cuestiones inscritas en el programa. Esos grupos de trabajo propondrían medidas prácticas sobre los respectivos territorios y oportunamente podrían fijar una fecha límite para la concesión de la independencia a los territorios que todavía se encontraban bajo la dominación extranjera. Ello se conformaría con el párrafo 9 de la resolución 2105 (XX), concebido en la forma siguiente:

“*Pide* al Comité Especial que, siempre que lo considere oportuno, recomiende una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los territorios considerados, conforme a los deseos de su población.”

El representante de Malí agradeció también al Gobierno tanzaniano la ayuda que prestaba a los movimientos africanos de liberación y rogó asimismo a la Secretaría que mantuviera al Comité Especial al corriente de los resultados de las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, a fin de ayudar al Comité Especial en sus trabajos.

45. El representante de Irán transmitió los saludos del pueblo y del Gobierno iraníes a la República Unida de Tanzania y expresó al Presidente la gratitud de su país por permitir que el Comité Especial celebrara sus sesiones en Dar es Salaam, donde tendría una oportunidad única e importante de encontrar a los representantes de miles de personas refugiadas en Tanzania — país de la libertad — y de conversar con ellos. El lugar escogido era importante porque ayudaría al Comité Especial a hallar los medios de poner rápidamente fin al colonialismo. El Vicepresidente Kawawa había tenido razón al decir en su inspirada intervención que no podía haber paz basada en la injusticia colonial. La paz

y la tranquilidad sólo reinarían en África cuando el colonialismo hubiera desaparecido totalmente del continente. Entonces sería posible consagrar al mejoramiento de las condiciones de vida en África las energías y esfuerzos que se empleaban en recobrar la independencia, pues bajo el colonialismo los africanos habían sido despojados de lo material y de lo espiritual.

46. Dijo que los progresos logrados en Tanzania durante el año transcurrido durante su visita precedente eran prueba evidente de lo que podía hacer un pueblo cuando era dueño de su destino. Bajo la dirección dinámica y prudente del Presidente Nyerere se habían realizado grandes adelantos en cuanto al desarrollo del país en la esfera económica, social, política y educativa. Tenía particular significación esta gran experiencia en la práctica de la democracia, que serviría de guía a los países recién independizados.

47. El representante de Irán se comprometió en nombre de su delegación a apoyar sin reservas todas las medidas que pudieran favorecer la liberación del pueblo de Zimbabue, de los habitantes de África Sudoccidental, de los pueblos bajo dominio portugués y de todos los demás pueblos sometidos aún a la servidumbre colonial.

48. El representante de Bulgaria expresó en nombre de la delegación de la República Popular de Bulgaria toda su gratitud al Gobierno y al pueblo de Tanzania por su invitación y su contribución a los trabajos del Comité Especial. El joven pueblo de Tanzania suscitaba admiración por estar en primera línea entre los que luchaban contra el colonialismo y el neocolonialismo. La alocución del Vicepresidente Kawawa era una nueva prueba de la participación de Tanzania en la lucha por la eliminación de los últimos vestigios del colonialismo en África. La República Unida de Tanzania podía contar con la ayuda y la amistad de todos los que luchaban contra el imperialismo, incluso Bulgaria.

49. El orador apoyaba sin reservas la llegada a África del Comité Especial y estimaba que el trabajo que habría de realizar sería el más importante del año. Efectivamente, en el vigésimo período de sesiones la Asamblea General había aprobado resoluciones que constituían un gran paso adelante. El Comité Especial debería hacer que se las aplicase sin demora, pues había llegado el momento de poner en práctica íntegramente la resolución 1514 (XV). Durante esa estancia, el Comité se pondría en contacto con los representantes de los pueblos oprimidos y debería preguntarse en qué forma podía ayudarlos eficazmente. Por lo que hacía a Rhodesia del Sur, por ejemplo, los últimos debates del Consejo de Seguridad habían demostrado que el Reino Unido no vacilaba en iniciar conversaciones con Ian Smith, ni en llegar a una fórmula de transacción con él. Por su parte, Bulgaria había apoyado los proyectos de resolución de los países africanos miembros del Consejo de Seguridad en los cuales se pedía al Reino Unido que utilizara su fuerza contra el régimen racista y que el Consejo de Seguridad aplicase las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta. El Comité Especial debería exigir al Reino Unido que suspendiera la Constitución de 1961 para restablecer los derechos del pueblo Zimbabue, que convocase una conferencia constitucional y que fijase la fecha de la independencia de Rhodesia del Sur. En cuanto a Portugal, Bulgaria había apoyado todas las resoluciones de las Naciones Unidas tendientes a la aplicación de sanciones contra el régimen colonial de Salazar a fin de

que los pueblos de Mozambique, de Angola y de la Guinea llamada portuguesa pudieran ejercer su legítimo derecho a la independencia. Los representantes de los movimientos de liberación podían contar con la ayuda y la cooperación del pueblo búlgaro.

50. El representante de Bulgaria dio las gracias al Vicepresidente Kawawa y le aseguró que la delegación búlgara tenía plena conciencia de las responsabilidades especiales que recaían sobre las Naciones Unidas en lo relativo al Africa Sudoccidental y a los Territorios de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. La resolución 1514 (XV) debería ser aplicada sin tardar y el Comité Especial se debería dejar guiar por los nobles principios de las Naciones Unidas y la preocupación de mantener la paz mundial; pero a ese respecto la delegación de Bulgaria suscribía sin reservas las sabias palabras del Vicepresidente Kawawa según el cual "era imposible la paz fundada en la injusticia del colonialismo".

51. El representante de Yugoslavia agradeció al Gobierno y al pueblo de Tanzania el haber invitado al Comité Especial a reunirse en Dar es Salaam. Puso de relieve el destacado papel que correspondía a Tanzania en la lucha contra el colonialismo y la política de apartheid y subrayó que los problemas coloniales que subsistían eran extremadamente graves, tanto más cuanto que no había habido ningún cambio favorable en la posición de las Potencias coloniales.

52. Dijo que su delegación consideraba que la visita a Africa del Comité Especial permitiría a los miembros familiarizarse íntimamente con los problemas planteados y estaba convencida de que ello contribuiría a que los trabajos del Comité fuesen más eficaces.

53. En nombre de la delegación de Yugoslavia dio las gracias al Vicepresidente Kawawa por su inspirada alocución, y presentó los mejores votos de Yugoslavia al Gobierno y pueblo de Tanzania.

54. El representante de Australia agradeció a Tanzania la amable acogida y la hospitalidad brindadas al Comité Especial. Presentó los saludos de la delegación australiana al Presidente Nyerere, guía y jefe importante de un pueblo no menos importante; y dio las gracias al Vicepresidente Kawawa por sus palabras de bienvenida y al Embajador Malecela por todo lo que había hecho y estaba haciendo.

55. Manifestó que existía un sentimiento de fraternidad entre los tanzanios y los australianos por ser ambos miembros del Commonwealth y compartir muchas instituciones e ideas heredadas en común. Australia había sido también un territorio colonial que había conocido la fiebre del período de transición anterior y posterior a la independencia y había comprendido que hacía falta tiempo para resolver muchos de los problemas que tenía planteados. Pero ese había sido período de gran exaltación. El orador podía sentir en Tanzania esa fiebre del progreso. Los australianos no pretendían saber mucho sobre Africa, pero había algunos africanos en su país, no muchos por cierto, entre los 12.000 estudiantes procedentes de los países en desarrollo, oriundos en su mayoría de los países asiáticos. Australia aprendía mucho de esos estudiantes y esperaba que ellos, a su vez, sacaran partido de su estancia. Gracias a ellos Australia había comprendido que el porvenir de Africa estaba en buenas manos. Personalmente, el orador tenía la impresión en esa su primera visita a Africa al Sur del Sáhara, de que un sueño se estaba realizando y de que una nueva esperanza había nacido en Africa.

56. El representante de Polonia expresó el reconocimiento y la gratitud de su delegación al Presidente Nyerere y al Gobierno y al pueblo de Tanzania por la invitación formulada al Comité Especial, y dijo que la acogida que éste había recibido demostraba ciertamente el deseo del país de ayudar a las Naciones Unidas en la lucha contra el colonialismo y el racismo.

57. Añadió que había tenido el privilegio de representar a Polonia en 1962 en el Comité de los Diecisiete, que se había reunido en Dar es Salaam, y había visitado nuevamente la capital en 1965 como miembro del Comité ampliado. Le resultaba muy satisfactorio observar los progresos realizados por Tanzania en todas las esferas del desarrollo nacional desde la independencia. El Gobierno y el pueblo de Polonia se congratulaban de las realizaciones políticas, económicas y sociales de Tanzania y le deseaban toda suerte de éxitos en sus aspiraciones a un porvenir feliz y próspero.

58. El discurso del Vicepresidente Kawawa había de servir de inspiración a todos los que deseaban acelerar el fin del colonialismo y el racismo en un momento en que aumentaba la preocupación por la opresión, abierta o disimulada, de las fuerzas coloniales y neo-coloniales. Polonia había apoyado siempre firmemente los movimientos de liberación nacional en Africa y en otras partes del mundo. El Comité Especial había tratado siempre de aprobar recomendaciones encaminadas a la solución pacífica de los problemas planteados por el colonialismo. Los responsables de la situación en Rhodesia del Sur, en los territorios bajo dominación portuguesa, en el Africa Sudoccidental y en Adén, así como en otros territorios dependientes, eran las Potencias coloniales, que se habían negado siempre a dar cumplimiento a las decisiones del Comité Especial, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La discriminación racial, las medidas opresivas y la acción militar directa en que habían incurrido Portugal, Sudáfrica y el régimen de Smith, así como la ayuda que recibían de los Estados Unidos de América, de la República Federal de Alemania, del Reino Unido y de otros países de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), demostraban que las Potencias coloniales estaban decididas a mantener la dominación blanca en esas partes de Africa y a defender los intereses de las sociedades y monopolios extranjeros que explotaban a los pueblos de toda la región. Esa política encerraba consecuencias trágicas y representaba un peligro para la paz y la seguridad. La delegación de Polonia creía, por consiguiente, que toda decisión o recomendación que aprobase el Comité Especial con relación a dichos territorios debería incluir disposiciones concretas para que en fechas próximas se eliminaran los regímenes coloniales y se dismantelaran las bases militares. Había llegado la hora de fijar, en consulta con los pueblos de los territorios dependientes, la fecha en que se concedería la independencia a cada uno de dichos territorios conforme a la opinión y las aspiraciones libremente expresadas de los habitantes. El argumento presentado con frecuencia por los defensores del supuesto "mundo libre", de que los pueblos dependientes no estaban maduros ni en condiciones de gobernarse a sí mismos, era contrario al espíritu de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que reconocía el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Los hechos recientes habían demostrado claramente que si no se adoptaban las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la existencia de regímenes coloniales agravaría la situación internacional y

llevaría al conflicto armado. Por último, el orador hizo suya la afirmación del Vicepresidente Kawawa de que cuanto antes actuasen en forma efectiva las Naciones Unidas, mejor sería para todos los interesados.

59. El representante del Irak dio las gracias al Gobierno y al pueblo de Tanzania por la acogida cordial y espontánea que habían brindado al Comité Especial.

60. El Vicepresidente Kawawa había señalado acertadamente la situación especial y la estima de que gozaba el Comité Especial en Tanzania y en todos los demás países amantes de la paz. El orador citó un pasaje del discurso en que decía el Vicepresidente que tarde o temprano, a falta de otros medios de lograr su libertad, los países subyugados recurrirían a la lucha; que la función del Comité Especial era evitar esa lucha creando una situación que permitiera al pueblo de cada nación gobernarse por sí mismo de conformidad con sus propios deseos y necesidades; y que por consiguiente los miembros del Comité Especial debían trabajar para que el Comité dejara de ser necesario.

61. En vista de lo expresado por el Vicepresidente, cabía lamentar la ausencia del delegado del Reino Unido. Los Estados Miembros tenían la obligación de respetar las resoluciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas, y eso se aplicaba en especial a las grandes Potencias, que deberían seguir demostrando su buena fe al resto del mundo.

62. La lucha del pueblo de Tanzania por la causa de la independencia en Africa y en todo el mundo había ganado la admiración de los combatientes por la libertad y de los países amantes de la paz. El orador estaba seguro de que las reuniones del Comité contribuirían a la causa de la libertad y a acelerar el proceso de descolonización y añadió que nada agradaría más a su delegación que la disolución del Comité Especial una vez que los pueblos colonizados del mundo hubiesen recuperado su dignidad y su libertad para bien de toda la humanidad.

63. El representante de Siria dio las gracias al pueblo y al Gobierno de Tanzania por su generosa hospitalidad. Dijo que, en materia de relaciones internacionales, Tanzania se había distinguido, bajo la dirección de su Presidente y la orientación de personas tan capaces como el Embajador Malecela, por su vigilancia y su lucha constantes contra el colonialismo. Leal a los principios y resoluciones de las Naciones Unidas, siempre procuraba traducir en actos los ideales de la Organización. En su discurso de esa mañana ante el Comité Especial, el Vicepresidente de Tanzania había señalado que el continente africano buscaba ante todo la justicia, pues sólo cuando reinase la justicia desaparecería la necesidad de luchar. Mientras no se asegurase la justicia, la lucha de los combatientes por la libertad sería no sólo un derecho sino también un deber, y debería contar con el apoyo de todos los países que declarasen creer en los principios de las Naciones Unidas y en la libertad de toda la humanidad. Cabía felicitar a la República de Tanzania por la obra admirable que había realizado en ese sentido.

64. Añadió que, como había dicho el representante de Malí, era hora de que el Comité Especial, y las Naciones Unidas en general, pasaran de los principios generales a la acción concreta. Había que convencer a los que seguían subyugando a muchos pueblos en Africa y en otras partes que tenían ante ellos una clara elección: reconocer la causa de la emancipación o enfren-

tarse en una lucha mortal que los llevaría en definitiva a la derrota. El Vicepresidente de Tanzania, Sr. Kawawa, había calificado, a justo título, de fundamental la tarea importante del Comité Especial, dada la situación explosiva que existía en regiones como Rhodesia del Sur, las colonias dominadas por los portugueses, Adén y Omán. Esos eran los hechos que deberían guiar en adelante al Comité Especial en su acción.

65. La representante de los Estados Unidos de América se unió a los oradores que la habían precedido para expresar el reconocimiento de su delegación por la generosa acogida brindada al Comité Especial por el Vicepresidente de Tanzania, Sr. Kawawa, y por la hospitalidad que le habían ofrecido el Gobierno y el pueblo de Tanzania. Como había señalado el Vicepresidente, era de esperar que llegase el día en que no fuesen necesarias las reuniones del Comité Especial, por haber quedado asegurado el derecho a la libre determinación mediante el sufragio universal, de todos los territorios que todavía eran dependientes.

66. El Gobierno de los Estados Unidos había expresado muchas veces la opinión, que reiteraba su representante en aquella oportunidad, de que un pueblo sólo podía darse el gobierno que deseaba mediante elecciones libres y con conocimiento de causa. Ninguna nación podía estar satisfecha hasta que los pueblos de Rhodesia del Sur, Africa Sudoccidental, las colonias portuguesas y los demás territorios dependientes hubiesen elegido libremente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el gobierno deseado.

67. Cabía esperar que el Comité Especial aprovechara la circunstancia de encontrarse en las proximidades de los territorios inscritos en su programa para familiarizarse directamente con los problemas difíciles y complejos que se planteaban diariamente los correspondientes pueblos. En vista de la desdichada suerte de esos pueblos, el Comité Especial debería dedicarse a un examen razonado de esos problemas y no a acusaciones provocativas y polémicas estériles.

68. Como había dicho el Vicepresidente, el pueblo de Tanzania, a diferencia de los de Rhodesia y otros territorios no autónomos en que se ocupaba el Comité Especial, había podido crear su propia sociedad y sus propias instituciones económicas y políticas. En vista del espíritu de entusiasmo con que ese pueblo se aplicaba a esas tareas, y del orgullo por los resultados obtenidos, la delegación de los Estados Unidos consideraba que había sido sumamente afortunado elegir a Tanzania como punto de partida para la visita del Comité a Africa.

69. Para concluir, añadió que se debería felicitar al Gobierno y al pueblo de Tanzania por los notables progresos realizados en el desarrollo de una economía moderna y activa.

70. El representante de Túnez recordó que cada vez que el Comité Especial decidía hacer una visita a Africa, el Gobierno de Tanzania no dejaba de invitarlo a celebrar una parte del período de sesiones en el suelo hospitalario de Tanzania que, a pesar de todos los problemas de desarrollo a que tenía que hacer frente, no perdía de vista su deber ni su responsabilidad en lo referente a la liberación de los pueblos que aún se hallaban bajo el yugo colonial. El orador agradeció por consiguiente al Gobierno y al pueblo de Tanzania el haber dado una vez más su hospitalidad cordial y fraternal al Comité Especial.

71. La delegación de Túnez había expuesto muchas veces su opinión sobre el colonialismo en el Comité Especial y en otras instancias internacionales. El Gobierno de Túnez era partidario de la liberación de todos los países que aún estaban bajo la dominación extranjera y no escatimaría esfuerzo alguno para aplicar las medidas que fuesen adoptadas para obtener resultados concretos en esa esfera.

72. El representante de Venezuela dio las gracias al Gobierno y al pueblo de Tanzania por la cordial acogida brindada al Comité Especial, y dijo que esperaba que este último hiciera un trabajo concreto y obtuviera resultados satisfactorios.

73. El representante de Etiopía declaró que su delegación se adhería a las expresiones de agradecimiento presentadas por los oradores anteriores al Gobierno y al pueblo de Tanzania. Deseaba asimismo rendir homenaje al pueblo de Tanzania por los sacrificios que había hecho y por los resultados que había obtenido en la lucha contra el colonialismo, tanto en África como en otras partes. Añadió que, como Embajador de Etiopía en Tanzania, tenía la satisfacción de poder dar testimonio de los notables progresos realizados por ese país bajo la dirección competente y dinámica del Presidente Nyerere.

74. En su discurso de apertura el Vicepresidente de Tanzania, Sr. Kawawa, había señalado claramente las tareas que debería cumplir el Comité Especial. Como había dicho, no podía haber seguridad en el continente hasta que no se eliminara de África la plaga del colonialismo. La delegación de Etiopía estaba firmemente convencida de que con ocasión de esta visita el Comité Especial contribuiría mucho a acercar la fecha en que desaparecería el colonialismo. Ayudando y alentando a los combatientes por la libertad, que habían emprendido una lucha mortal con las implacables fuerzas de la opresión, el Comité Especial, como representante de la conciencia moral de toda la humanidad, podría hacer progresar mucho la causa de la justicia y del derecho, signos distintivos de la sociedad internacional.

75. El representante de Italia expresó el reconocimiento de su delegación al Gobierno de Tanzania por su hospitalidad, y dio las gracias al Vicepresidente, Sr. Kawawa, por sus amables palabras de bienvenida. El Comité Especial, que ya había tenido el privilegio de reunirse en el acogedor ambiente de Dar es Salaam en 1965, habría de beneficiarse por su nuevo contacto con las realidades de la escena africana y podía hacer verdaderos progresos hacia los objetivos sobre los cuales todos estaban de acuerdo.

76. En cuanto al fondo de los trabajos del Comité Especial, la delegación de Italia se asociaba plenamente al Presidente para declarar que, a su juicio, el Comité debería demostrar la preocupación cada día mayor de las Naciones Unidas ante la situación de los pueblos bajo administración colonial y reforzar la capacidad de la propia Organización para ayudar a esos pueblos en su lucha por la libre determinación y la independencia. Las declaraciones de los peticionarios serían particularmente valiosas: la información que pudieran proporcionar sobre la situación en sus territorios respectivos, así como sus opiniones sobre la mejor forma de lograr los objetivos establecidos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, ayudarían mucho al Comité Especial en sus debates y servirían al mismo tiempo para proporcionar un nuevo estímulo a los peticiona-

rios. Habida cuenta de dichos factores, la delegación de Italia deseaba asegurar que participaría plena y lealmente en los trabajos del Comité Especial, que sin duda alguna sería una labor fructífera.

77. El representante de Dinamarca agradeció al Vicepresidente de Tanzania su cordial bienvenida y su excelente análisis de la opinión de su Gobierno sobre los problemas del colonialismo. La delegación de Dinamarca reconocía al Gobierno de Tanzania la generosa invitación que había hecho al Comité de celebrar parte del actual período de sesiones en Dar es Salaam. Los que habían participado en el anterior período de sesiones del Comité Especial recordaban la cálida hospitalidad que habían brindado al Comité Especial el Gobierno y el pueblo de Tanzania, así como las excelentes medidas de organización que se habían adoptado en aquella ocasión. La delegación de Dinamarca, que comprendía perfectamente el papel activo desempeñado por Tanzania en la lucha contra el colonialismo, así como la energía y el celo con que estaba haciendo frente a los problemas internos de un país recién independizado, ansiaba enterarse de los progresos realizados durante el año transcurrido.

78. En lo tocante a la labor del Comité Especial en África, inquietaba a la delegación de Dinamarca lo poco o nada que se había logrado en cuanto a la situación en Rhodesia del Sur, África Sudoccidental y las colonias portuguesas. No obstante, cabía esperar que el Comité Especial, que tendría ocasión de examinar detalladamente estos graves problemas, demostraría que merecía la confianza de los pueblos africanos, tanto por sus palabras como por sus hechos. El Presidente del Comité Especial y el representante de Italia habían señalado acertadamente que una de las tareas más importantes del Comité Especial era hacer conocer la profunda preocupación de las Naciones Unidas ante el problema del colonialismo. Para ello, el Comité Especial tendría que ponerse de acuerdo, no sólo sobre el principio general de que debería ponerse fin al colonialismo cuanto antes, sino también sobre la forma de lograrlo. Ello exigiría evidentemente que todas las partes hicieran concesiones; pero la delegación de Dinamarca creía que así se serviría la causa común, o sea, la lucha eficaz contra el colonialismo.

79. Por último, el orador expresó la esperanza de que el período de sesiones del Comité Especial en África fuese fructífero y que todas las delegaciones estuvieran animadas de un espíritu de cooperación.

80. El representante de Madagascar dijo que el Gobierno de Madagascar estaba en contra del colonialismo y que su punto de vista en la materia, expresado ya en muchas ocasiones, era bien conocido. Añadió que presentaría sus observaciones sobre los temas del programa a medida que se examinaran.

81. Dio las gracias al Gobierno de Tanzania por haber invitado una vez más al Comité Especial a celebrar parte del período de sesiones en Tanzania.

82. El representante de Sierra Leona declaró que todas las delegaciones desearían indudablemente estudiar la importante y penetrante declaración hecha por el Vicepresidente de Tanzania en su discurso de apertura en el Comité Especial.

83. Mientras los problemas del colonialismo subsistían se hacía todo lo posible por liberar a los países interesados, a pesar de los grandes obstáculos. Sierra Leona había apoyado esos esfuerzos en todos los ór-

ganos de las Naciones Unidas y había mantenido su posición en forma inequívoca, tanto en la Organización de la Unidad Africana como en los demás órganos internacionales. El orador se proponía formular observaciones detalladas acerca de la política de su Gobierno a medida que el Comité Especial examinara cada territorio. Cabía esperar que fuesen socorridos los combatientes por la libertad que habían tenido que huir de su país, y que, gracias a sus deliberaciones, el Comité Especial pudiera aproximarse a una solución del problema del colonialismo.

84. Expresó el reconocimiento de su delegación al Gobierno y al pueblo de Tanzania, y dijo que el Comité Especial conocía bien la hospitalidad que les fue brindada en las reuniones celebradas en Dar es Salaam el año anterior. Cabía esperar que los resultados de ese período de sesiones del Comité Especial fuesen mejores que los de 1965.

85. El representante de la Costa de Marfil lamentó que su sugerencia no hubiese sido adoptada, y agradeció sinceramente al Gobierno de Tanzania la amable invitación formulada al Comité Especial y la cordial acogida que se le ha brindado. Expresó su reconocimiento al Vicepresidente de Tanzania por su sabio mensaje, que la delegación de la Costa de Marfil no dejaría de tener en cuenta en los trabajos que estaba por iniciar el Comité Especial.

86. El representante de la República Unida de Tanzania declaró que su delegación se congratulaba de que el Comité Especial pudiera celebrar su primera sesión en la capital de Tanzania.

87. Como gran parte de la política de su Gobierno con respecto al problema del colonialismo había sido esbozada ya por el Vicepresidente de Tanzania, sólo quería asegurar al Comité Especial que las expresiones de agradecimiento serían transmitidas a sus destinatarios. Deseaba asimismo, en nombre de su delegación, dar la bienvenida en Tanzania a todos los miembros del Comité Especial cuya presencia en Dar es Salaam hacía recordar lo que aún quedaba por hacer en la lucha por la liberación del continente africano. Una vez lograda la independencia, el talento y la capacidad que se empleaban con ese fin, por ejemplo en el propio Comité Especial, podrían utilizarse en otras esferas del progreso humano, en particular en Africa que había sido explotada durante tanto tiempo.

88. Mientras permanecieran en Tanzania, los miembros del Comité Especial encontrarían quizá algunos inconvenientes, pero su Gobierno haría todo lo posible para reducir al mínimo esas dificultades, en la medida en que lo permitieran los recursos limitados de un país en desarrollo.

89. Por último, expresó la esperanza de que todos los miembros del Comité Especial disfrutaran de su visita a la República Unida de Tanzania.

*Aniversario del Día de la Liberación de Africa,
celebrado el 25 de mayo de 1966*

Declaraciones generales

90. El representante de Venezuela recordó que el año anterior, en Lusaka, el Comité Especial había formulado el anhelo de volver a Africa para celebrar el Día de la Unidad Africana en un continente totalmente libre, es decir, como tan elocuentemente lo expresara

el Presidente Kaunda, en la esperanza de la unidad de un continente completamente liberado del yugo del colonialismo. El Día de la Unidad Africana había llegado y esta esperanza estaba lejos de haberse realizado. El Presidente Kaunda no podía secar sus lágrimas aún, puesto que millones de sus hermanos padecían todavía la dominación extranjera. Pero el colonialismo había sido juzgado y condenado. Nada ni nadie podría impedir ahora la ejecución de la sentencia. El curso de la historia era irreversible. El colonialismo tenía que desaparecer y desaparecería de todos los lugares donde subsistía. Los pueblos de Africa que aún seguían sometidos a un régimen colonial tenían, como todos los pueblos de la tierra, un derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia. No estaba lejos el día en que se les reconociera este derecho. La unidad africana, que había tenido tan buen comienzo, no podría realizarse completamente mientras existieran en el continente africano pueblos sometidos a la dominación extranjera. Los pueblos latinoamericanos, que habían pagado muy caro en vidas humanas y en bienestar económico su independencia, y que todavía luchaban para suprimir los últimos vestigios del colonialismo en América, apoyaban incondicionalmente a sus hermanos africanos en su batalla para recobrar su dignidad nacional y su libertad. Los pueblos latinoamericanos expresaban el anhelo de que, en un porvenir muy próximo, pudiera celebrarse el Día de la Unidad Africana en un continente compuesto únicamente de Estados libres e independientes, donde hubiera desaparecido la desigualdad racial, donde las relaciones entre los hombres se fundaran sobre el respeto de los derechos humanos y donde reinara la armonía, símbolo de unidad y de prosperidad.

91. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en nombre de las delegaciones de Bulgaria, de Polonia y de la URSS, saludó a los pueblos de Africa que celebran el Día de la Unidad Africana.

92. En el curso de la reunión histórica que habían celebrado en Addis Abeba en mayo de 1963, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países africanos independientes habían decidido festejar, el 25 de mayo de cada año, el aniversario de la liberación de Africa. En su espíritu, se trataba de recordar a todos los pueblos africanos, estuvieran liberados o continuaren sufriendo el yugo del opresor, la tarea que aún quedaba por cumplir. En efecto, correspondía a los africanos eliminar de Africa, cuanto antes, los últimos vestigios del colonialismo. Para los miembros de la Conferencia en la cumbre, reunidos en Addis Abeba, no hacía falta afirmar que ningún pueblo africano se podría considerar enteramente libre mientras una parte del continente africano siguiera padeciendo bajo la bota de los colonialistas.

93. En unos pocos años Africa había sufrido una transformación radical: muchos países africanos se habían independizado y varios nombres que los africanos habían aprendido a odiar habían desaparecido del mapa de Africa. Había llegado el turno de los países situados en el sur del continente africano. Allí estaba situada la última línea de defensa del colonialismo y allí estaba el colonialismo en trance de cavar su propia fosa. La lucha cada día más encarnizada que por su liberación desarrollaban los pueblos de Angola, Mozambique y la Guinea llamada portuguesa demostraba al mundo entero que el destino del colonialismo estaba sellado.

94. Todos los hombres de buena voluntad se regocijaban por el triunfo de los pueblos africanos en su lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Los pueblos de la Unión Soviética, de Bulgaria y de Polonia, como los pueblos de los otros países socialistas, habían demostrado a los africanos la fidelidad de su amistad y, más que nunca, se sentían dispuestos a prestarles ayuda y asistencia.

95. En un día en que los pueblos de Africa celebraban la liberación de su continente y en que todos los que combatían por la liberación y la independencia de Africa compartían su alegría, las delegaciones de Bulgaria y de Polonia y de la URSS rendían homenaje a la lucha sagrada iniciada por los africanos para la liberación completa de su tierra ancestral, de la cual una parte seguía aún sometida a la dominación extranjera, y para el desarrollo de sus países en la paz, la libertad y el progreso. Esas delegaciones hacían votos porque los pueblos africanos y la Organización de la Unidad Africana obtuvieran nuevos triunfos en su noble empresa: la unión de todas las fuerzas del continente africano en lucha contra el imperialismo y el colonialismo, para promover la paz y el progreso social.

96. El representante del Irán hizo observar que ese día — el día de Africa — era el tercer aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana, instrumento de la solidaridad africana, y la segunda oportunidad en que el Comité Especial tenía la buena fortuna de hallarse en suelo africano en persecución de los mismos objetivos que la OUA.

97. En su propio nombre y en nombre de los países asiáticos representados en el Comité Especial, extendió cordiales felicitaciones a la OUA que, en su muy corta existencia, había hecho mucho por ayudar a los movimientos de liberación en todas partes de Africa y había sido instrumento para promover la cooperación interafricana. La OUA se estaba convirtiendo rápidamente en un centro para la coordinación de las actividades de las naciones africanas encaminadas a resolver los problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios, de conformidad tanto con la Carta de la OUA como con la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. La OUA, a diferencia de muchas organizaciones similares, era, más que una mera institución, un concepto vivo y un reflejo de profundos sentimientos africanos que aspiraban a una unión más amplia que trascendiera los límites étnicos y nacionales.

98. En su propio nombre manifestó que Africa, en su campaña en pro de la unidad, era mucho más progresista y moderna que otros continentes, ya que un africano, además de su lealtad a su propio país, se consideraba apasionadamente africano. Este sentimiento constituía un ingrediente vital para la posible unidad en escala continental, y ese era el espíritu que había hecho nacer a la OUA. Ese mismo espíritu ayudaría a la OUA a sobrellevar los obstáculos puestos en su camino por quienes estaban interesados en verla desacreditada y, finalmente, el mismo espíritu sería el que, en última instancia arrancaría de raíz a Smith y a su campaña, a pesar de los inconvenientes transitorios, y traería la libertad y la independencia a todos los africanos.

99. El representante del Irak, en nombre de su delegación y de la de la República Árabe Siria dijo que juzgaba que expresaba los sentimientos de todos los árabes al tomar la palabra en tan auspicioso día, que simbolizaba las esperanzas y aspiraciones del pueblo del gran continente africano.

100. La nación árabe estaba ligada a Africa por innumerables vínculos, ya que más de la mitad del mundo árabe vivía de hecho en suelo africano, y el resto en su vecindad geográfica. Tanto los árabes como los africanos habían sufrido, y algunos todavía seguían sufriendo la dominación colonial. Contaban con toda la ayuda que las Naciones Unidas podían darles para ganar la libertad, la dignidad y la independencia. La historia, la religión y la cultura también habían unido a los árabes y a los africanos, moldeando su común herencia y sus intereses comunes.

101. La lucha del pueblo africano en Rhodesia del Sur, Mozambique, Angola y el resto de las colonias en Africa se seguía con gran interés y admiración en el mundo árabe, con no menor interés, en realidad, que en la liberación del resto del mundo árabe.

102. En esa magna ocasión, el orador quería invocar los sentimientos del gran poeta americano Walt Whitman, cuya creencia en la fraternidad e intereses comunes del hombre había inspirado aquel poema que empezaba con las líneas:

*"I celebrate myself
And sing myself,
And what I shall assume
You shall assume,
For every atom
Belonging to me
As good belongs to you."*

103. La celebración del Día de Africa no se limitaba al gran continente africano, sino que era compartida por todas las naciones amantes de la libertad y por toda la humanidad.

104. La representante de los Estados Unidos de América, hablando en nombre de su propia delegación y de las delegaciones de Australia, Dinamarca e Italia, ofreció las más calurosas felicitaciones a la Organización de la Unidad Africana y a los Estados africanos independientes. El Día de Africa era un apropiado recuerdo del desarrollo fenomenal de los Estados independientes en los dos últimos decenios.

105. Asimismo hacía pensar en que todavía no se reconocía universalmente el derecho de los pueblos a la libre determinación, a expresar libremente su deseo y a gobernarse a sí mismos según consideraren conveniente. La Organización de la Unidad Africana podría contribuir cada día más a este reconocimiento universal, donde quiera que existiera una represión de esos derechos. Su papel era de capital importancia para los países africanos y para los demás países que, como el suyo, tenían intenso interés en el porvenir de Africa.

106. Añadió que el continente africano poseía grandes recursos humanos y naturales y un enorme potencial para el desarrollo económico. Su país, junto con otros, tenía el privilegio de contribuir con asistencia técnica y económica y con ayuda a la enseñanza.

107. Una clave importante del porvenir económico de Africa era la creciente cooperación entre las naciones, que la OUA estaba en situación de promover. La cooperación en asuntos sociales y culturales también era una actividad significativa, a la que la OUA podría aportar una importante contribución.

108. La oradora congratuló a los miembros del Comité Especial que representaban a los países africanos, y les pidió que transmitieran a los pueblos de Africa los más cordiales y buenos deseos de todos los ameri-

canos y de todas las delegaciones en cuyo nombre hablaba.

109. El representante de Yugoslavia, hablando en nombre de su Gobierno, de su pueblo y de su delegación, saludó con toda simpatía al pueblo de Africa en su aniversario histórico.

110. Destacó la importancia de la OUA y de su papel internacional, reconocido por la resolución aprobada en 1965 por la Asamblea General sobre el tema, y expresó la esperanza de que se lograra una intensa y eficaz cooperación entre la OUA y las Naciones Unidas. Dijo que su delegación había apoyado la propuesta de que el Comité Especial visitara a Africa y había expresado su esperanza de que la visita ofreciera muchas posibilidades para promover la cooperación entre el Comité Especial y la OUA.

111. A continuación subrayó que Yugoslavia tenía relaciones muy amistosas con los Estados africanos independientes y apoyaba firmemente a los que todavía no habían logrado la independencia.

112. Manifestó su más cordial deseo de que la OUA conquistase nuevos éxitos, hizo votos por la prosperidad de Africa y le auguró un mejor porvenir.

113. El representante de la República Unida de Tanzania declaró que, para los hijos e hijas de Africa, el Día de Africa era ocasión de festejos, meditación y resolución. Ese día proporcionaba a los africanos la oportunidad de meditar sobre dos aspectos: la libertad conquistada en los Estados liberados y su defensa de la causa de la liberación de la sujeción colonial y del apartheid de aquellos Estados que todavía los padecían. Hacía sólo diez años, la explotación colonial reinaba sin freno en todo el continente. El pueblo africano, a pesar de la superioridad aplastante en su contra, se había puesto de pie para liberar a su continente y gozar de sus legítimos derechos a la libertad y a la independencia. Muchos de sus combates contra sus bien armados opresores habían terminado en la victoria. Los países que habían logrado su independencia estaban tratando de consolidarla.

114. El segundo aspecto, la causa de la liberación de los países todavía oprimidos, había sido claramente puesto de relieve por la presencia del Comité Especial en Africa. Millones de hermanos africanos estaban oprimidos por las minorías racistas de Rhodesia del Sur y de Sudáfrica, que habrían sido derrotadas de no contar con la ayuda militar y económica de sus aliados, a pesar de las muchas resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. Por ello, una vez más, los africanos libres tenían que reiterar su apoyo incondicional a la justa lucha de sus hermanos en Sudáfrica, el Africa Sudoccidental, Rhodesia del Sur y otros países. Aquel día debería ser un día de renovada dedicación y renovada promesa de apoyo a la Carta de la Organización de la Unidad Africana, para poder lograr el objetivo final de la unión de Africa; un día para recordar a todos los colonizadores en Africa que su partida debió haberse efectuado hacía mucho tiempo y que no había nada que los Estados africanos libres no estuvieran dispuestos a hacer para lograrlo. No obstante, el deseo de todos los africanos era vivir en amistad con el resto del mundo, siempre que esa amistad se fundase en la libertad y la igualdad.

115. El Presidente observó que no era por coincidencia que el Comité Especial se reunía en Africa el

Día de Africa: era la señal de que Africa había llegado a las Naciones Unidas.

116. Hablando en su propio nombre, expresó, como un orgulloso y humilde hijo de Africa, la esperanza de que el porvenir fuese más luminoso que el pasado y de que la paciencia y la flexibilidad del pueblo africano pudieran encontrar plena expresión en los años futuros y por ende permitirles contribuir a los valores humanos fundamentales.

Clausura de las reuniones

Declaraciones generales

117. El Presidente anunció que el Comité Especial había llegado al término de sus deliberaciones en Dar es Salaam. Los peticionarios habían proporcionado nuevas ideas e informaciones frescas y el Comité se había beneficiado con la cooperación de la Organización de la Unidad Africana y había aprobado una resolución (A/AC.109/167) que entrañaba una importante contribución a la solución del problema de Rhodesia del Sur. Añadió que había escuchado con interés a los peticionarios de Rhodesia del Sur, Mozambique y el Africa Sudoccidental, cuyo testimonio indudablemente ayudaría al Comité Especial en la tarea de apresurar el adelanto y la independencia de esos territorios.

118. En nombre del Comité Especial expresó su profunda gratitud al Gobierno y al pueblo de la República Unida de Tanzania por su cordial hospitalidad y por sus muchos actos de amabilidad personal.

119. El representante del Secretario General manifestó, en nombre de la Secretaría, su profunda gratitud a los invitantes del Comité Especial por su generosa hospitalidad y los muchos servicios prestados. Se mostró particularmente agradecido a los Sres. Malecela y Foun, así como a los demás miembros de la delegación de Tanzania que habían hecho todo lo posible para facilitar la tarea de la Secretaría.

120. El representante de la República Unida de Tanzania, en nombre del Presidente, del Gobierno y del pueblo de Tanzania, manifestó la satisfacción que sentía su país en acoger al Comité Especial. Su actitud brotaba de su sincera creencia en la labor de las Naciones Unidas y en la necesidad de la descolonización.

121. Dijo que esperaba que la tarea del Comité Especial en Dar es Salaam y en otras partes de Africa fuese fructífera y que se aplicaran las resoluciones aprobadas. Añadió que su propio país haría todo lo posible por aplicar esas decisiones, con objeto de que los hermanos africanos que seguían bajo el yugo del colonialismo fueran liberados y pudieran unirse a las Naciones Unidas.

B. REUNIONES CELEBRADAS EN MOGADISCIO, SOMALIA

Apertura de las reuniones

Discurso del Primer Ministro en nombre del Presidente de Somalia

122. El Primer Ministro de Somalia manifestó su gran placer en dar la bienvenida al Comité Especial a su llegada a Mogadiscio en nombre de S. E. el Presidente Aden Abdulla Osman y del Gobierno y del pueblo de la República Somalí. Dijo que el pueblo de Somalia se honraba especialmente de poder acoger en su país al Comité. Somalia tenía una deuda de gratitud

con las Naciones Unidas, ya que, gracias al régimen de administración fiduciaria, le había sido posible la transición tranquila y segura desde la sujeción colonial a la independencia soberana. Si Somalia podía en alguna forma ayudar al Comité en su tarea de aplicar la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, habría hecho algo para pagar esta deuda.

123. El pueblo de Somalia se honraba de dar acogida al Comité Especial porque tenía una cabal comprensión del significado histórico de sus trabajos en África, que habían demostrado que el concepto de colonialismo había sido condenado. Millones de personas en el continente africano, sometidas antes a la humillación e indignidad de servir los intereses económicos y políticos de las Potencias coloniales, podían en la actualidad labrarse sus propios destinos. Como pueblo rudamente dividido por las Potencias coloniales y nación que aún padecía esta división, los somalíes estaban particularmente conscientes de la importancia de la tarea del Comité Especial. Comprendían asimismo que la lucha contra los enclaves que perduraban del colonialismo podía ser la más ardua. El pueblo de Somalia se asociaba a la preocupación del Comité por la suerte de quienes aún tenían que luchar por su libertad, y el Comité podía estar seguro de su completo apoyo en esa empresa.

124. La visita del Comité Especial y la presencia en Mogadiscio de los peticionarios le recordaban los días en que el propio orador hablaba ante el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas como peticionario. Había intervenido en nombre de Somalia en una época en que su trayectoria hacia la independencia estaba aún por determinarse y, en consecuencia, sabía muy bien el valor de esas audiencias: brindaban una ocasión para exponer opiniones personalmente; daban aliento a los que luchaban por su libertad y estimulaban el interés mundial por la causa de la libertad. La circunstancia de que el Comité Especial podía celebrar algunas de sus reuniones en África había realzado el significado de las audiencias. Merced a sus comprobaciones, el Comité estaría en condiciones de presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas un cuadro más completo de la situación que prevalecía en cada uno de los Territorios coloniales que subsistían. Por otra parte, el amplio itinerario organizado para su visita permitiría que los peticionarios de las regiones más remotas fueran oídos.

125. Idealmente, el Comité Especial debería visitar los propios Territorios. La razón de que esto no hubiese sido posible, sin embargo, era bien conocida: los gobiernos que administraban a estos Territorios tenían mucho que ocultar, y una visita del Comité refutaría en definitiva la falsa propaganda que acerca de ellos hacían. En todas esas regiones, y particularmente en las controladas por Sudáfrica y Portugal, las Potencias coloniales habrían querido que el mundo creyera que los habitantes autóctonos bajo su hegemonía estaban satisfechos de su suerte y que el mejoramiento económico significaba para ellos más que el logro de la igualdad política y social. Esas aseveraciones eran obviamente falsas. Existía una gran e injusta diferencia entre todos los trabajadores africanos y los inmigrantes colonizadores blancos, diferencia que se mantenía denegando sus derechos políticos y sociales a los africanos.

126. Reiteradamente la historia había mostrado categóricamente que la búsqueda de la identidad nacional gracias al proceso de libre determinación era una ten-

dencia inexorable seguida por todos los pueblos como parte de su desarrollo natural. Cuando se negaba este derecho natural las consecuencias inevitables eran la intranquilidad y el trastorno sociales. Desafortunadamente, esa intranquilidad se había manifestado ya en muchos Territorios coloniales y, en algunos, había suscitado graves y cruentos conflictos.

127. En opinión del orador lo más importante era que la Asamblea General de las Naciones Unidas se había comprometido, por la decisión de una mayoría, a garantizar el rápido progreso hacia el gobierno propio de todos los pueblos bajo el régimen colonial. Si se permitiera a los Estados Miembros eludir esta decisión y si fuesen apoyados y alentados por poderosos países industrializados, que colocaran el interés económico por encima de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entonces se justificaría la acusación de que las Naciones Unidas habían olvidado sus objetivos, lo que en realidad sería deplorable.

128. No se proponía, sin embargo, terminar con una nota pesimista. Las Naciones Unidas habían hecho ya mucho por la liberación de los pueblos coloniales y el Comité Especial seguía proponiendo soluciones, prácticas y sagaces, a los urgentes problemas coloniales de la época. Se requeriría tiempo y ciertamente una voluntad decidida de parte del Comité antes que sus recomendaciones se pusieran en práctica. Pero las fuerzas irresistibles de la libertad, que habían transformado radicalmente el mapa de África en el último decenio, de ningún modo estaban agotadas. Confiaba en que la presencia del Comité en África sería un estímulo para estos esfuerzos y permitiría que continuaran operando con el mismo grado de intensidad hasta que todos los africanos obtuvieran su libertad.

Declaraciones generales

129. El Presidente expresó su reconocimiento al Primer Ministro y al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia, por su generosa invitación al Comité Especial para celebrar una parte de sus reuniones en Mogadiscio.

130. La cálida acogida dispensada al Comité Especial a su llegada a Mogadiscio, que era tanto una exteriorización de la tradicional hospitalidad africana como una expresión de la firme actitud del pueblo somalí contra el colonialismo, habían hecho que sus miembros aquilataran mejor la confianza depositada en ellos y en las Naciones Unidas.

131. Le complacía advertir los progresos realizados por Somalia en todos los aspectos desde que alcanzó la independencia, y que el señor Primer Ministro hubiera tenido la gentileza de referirse a la asistencia prestada por las Naciones Unidas en este sentido. A su vez, el Gobierno y el pueblo de Somalia podían tener la certeza de que, en el cumplimiento de su cometido, el Comité Especial se había inspirado en la aportación de las Naciones Unidas a la independencia de Somalia.

132. Como había señalado acertadamente el Primer Ministro, idealmente el Comité Especial debería visitar los propios Territorios coloniales, pero desafortunadamente eso no había sido posible por falta de cooperación de las Potencias administradoras. Por tanto, el Comité celebraba sus reuniones en África lo más cerca posible de los diversos centros de la lucha colonial. Esperaba de este modo adquirir un conocimiento más directo de las aspiraciones de los pueblos coloniales al mis-

mo tiempo que demostraba una vez más la solidaridad del Comité con ellos y su determinación de no escatimar esfuerzos para ayudar a sus países a lograr la independencia.

133. Por eso el orador quería informar a todos los representantes de movimientos nacionales de liberación, así como a todos los pueblos africanos sometidos al yugo colonial, que la visita del Comité Especial a Mogadiscio era aún otra expresión de la firme voluntad de las Naciones Unidas de liquidar el colonialismo sin demora. En verdad, a pesar de los esfuerzos desplegados, los progresos habían sido lentos. No obstante, al aplicar los principios de la Carta, las Naciones Unidas procuraban lograr sus objetivos primordialmente merced a la persuasión. Por eso, si los esfuerzos de las Naciones Unidas no habían sido tan fructíferos como cabía esperar, incumbía la responsabilidad a las Potencias coloniales, pues se habían negado a cooperar con el Comité.

134. Por último, reiterando su agradecimiento al Primer Ministro, al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia, declaró que el Comité Especial haría cuanto estuviera a su alcance por cumplir la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

135. El representante de Italia asoció su delegación a las expresiones de agradecimiento del Presidente al Gobierno y al pueblo de Somalia, que ocupaban un lugar señalado en el corazón de todos los italianos. Los esfuerzos comunes de Somalia e Italia, durante los años de la administración fiduciaria, no habían sido en vano, y la tarea de conducir a Somalia a la independencia se había cumplido a entera satisfacción de las Naciones Unidas.

136. Según había manifestado el Presidente, el Comité Especial había acudido a Africa para demostrar la preocupación creciente de las Naciones Unidas por la situación de los pueblos coloniales, así como para consolidar su propia capacidad de ayuda a éstos en su lucha por la independencia. Mientras permaneciera en Mogadiscio examinaría el problema que tanto importaba al pueblo de Somalia.

137. Le habían impresionado el idealismo y sentido de responsabilidad implícitos en las palabras del Primer Ministro de Somalia, que tendría en cuenta el Comité Especial cuando llegase el momento de presentar sus recomendaciones a la Asamblea General. El Comité no podía siempre prometer prontas soluciones, pues ello no era compatible con la naturaleza de los propios problemas ni con el espíritu de las Naciones Unidas, que trataban de actuar valiéndose de la conciliación y la mediación, sin recurrir al uso de la fuerza. No obstante, el Gobierno y el pueblo de Somalia podían estar seguros de que las deliberaciones del Comité se inspirarían en el sentido de responsabilidad y de justicia que habían caracterizado siempre sus trabajos. Los resultados que se lograsen no menoscababan la confianza que el pueblo somalí había depositado en las Naciones Unidas.

138. El representante de la República Unida de Tanzania agradeció al Gobierno y al pueblo de Somalia su oportuna invitación para que el Comité Especial se reuniera en Mogadiscio, y expresó su reconocimiento al Primer Ministro por sus palabras de bienvenida. El entusiasmo con que el Comité había sido recibido a su llegada a Mogadiscio demostraba que el espíritu que prevalecía en Africa conduciría en definitiva a la aniquilación del colonialismo.

139. La actitud de Tanzania respecto del colonialismo era bien conocida: todos los africanos tenían el deber de asegurar la liberación de esos Territorios que aún explotaban y oprimían los colonialistas y, tal como su delegación había declarado reiteradamente, no podía existir verdadera libertad en Africa hasta que esto se realizara. Tanzania apoyaba la lucha por la independencia, no sólo de africanos, sino de todos los pueblos que en el curso de la historia habían sido subyugados por colonialistas. Las reuniones del Comité en Mogadiscio eran una página en la historia de la lucha contra el colonialismo, al igual que las luchas en Argelia, Kenia y el Congo en su época. En definitiva, los pueblos de Africa triunfarían y lograrían no sólo su propia libertad, sino que reforzarían también la de todos los hombres en el mundo entero, y robustecerían a las Naciones Unidas, fundadas, como se sabía, en la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

140. Era de suma importancia para los trabajos del Comité Especial poder reunirse en suelo africano, donde se palpitaba la urgencia de los problemas, motivo por el cual Tanzania se había permitido invitar al Comité durante una parte de sus reuniones en Africa.

141. Por último, expresó su convicción de que el espíritu revolucionario promovería los intereses de la liberación africana.

142. El representante del Irak, manifestando el reconocimiento de su delegación al Gobierno y al pueblo de Somalia, dijo que desde tiempos inmemoriales árabes y somalíes habían vivido juntos, compartiendo los mismos ideales y aspiraciones. Grandes valores espirituales los ligaban y sus características habían sido configuradas por una herencia común. En los últimos años, la lucha contra el colonialismo los había unido aún más estrechamente en simpatía y comprensión. La delegación del Irak había quedado muy gratamente impresionada por el entusiasmo con que se había recibido al Comité Especial, por la hospitalidad y cortesía del pueblo somalí y por la atmósfera de cordial cooperación que imperaba. Tenía plena conciencia de la función positiva desempeñada por Somalia, en estrecha colaboración con los Estados árabes, así como en la OUA y otros órganos, en la descolonización y emancipación de todos los pueblos avasallados.

143. El representante de Etiopía expresó la complacencia y el reconocimiento de su delegación por la acogida y hospitalidad brindadas por el Gobierno y el pueblo de Somalia.

144. Declaró que el pueblo de Etiopía consideraba al pueblo de Somalia como hermanos y hermanas y abrigaba los más cálidos sentimientos hacia ellos. Por eso, consideraba las diferencias que dividían a ambos países como una fase temporal que pasaría y quedaría olvidada con el tiempo, pues los nexos de fraternidad que los unían eran tan fuertes como variados.

145. Hacía unos seis años había tenido el honor de participar en la celebración de la independencia de Somalia como miembro de la delegación oficial de Etiopía, y recordaba la alegría que había compartido en la hermosa ciudad de Mogadiscio con el pueblo por haber alcanzado la libertad y la independencia. Toda la nación etíope había participado del regocijo del pueblo somalí, pues su día de la independencia, el 1º de julio de 1960, había señalado no sólo la culminación triunfal de la lucha sobrellevada por los pueblos de ambos países por la erradicación del colonialismo en su sector de Africa,

sino también el comienzo de una nueva era en las relaciones de Somalia y Etiopía, una era de estatuto independiente igual como dos Estados africanos vecinos, con todos los deberes y responsabilidades que ello implicaba para los habitantes de ambos países recíprocamente, así como en cuanto a la comunidad internacional en su conjunto. Etiopía se congratulaba legítimamente por el humilde papel que le había cabido desempeñar, tanto en las Naciones Unidas como en otras organizaciones internacionales, para provocar esta feliz situación.

146. Sin embargo, con toda sinceridad, se creía obligado a referirse a los sucesos acaecidos la víspera. No había que añadir que su delegación había visto con pena y tristeza las manifestaciones que habían tenido lugar.

147. En primer lugar, deseaba aludir a ciertas partes pertinentes de las atribuciones del Comité, pues parecía existir cierta confusión y malentendido en algunas personas de Mogadiscio en cuanto a los propósitos y objetivos para los cuales se había creado el Comité. Sus atribuciones, consignadas en la resolución 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961 de la Asamblea General dicen, entre otras cosas, así:

"1. *Reitera y reafirma solemnemente* los objetivos y principios incorporados a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960;

"...

"4. *Pide* al Comité Especial que examine la cuestión de la aplicación de la Declaración, ... e informe ... a la Asamblea General ...;

"5. *Encarga* al Comité Especial que, para llevar a cabo su labor, utilice todos los medios que tenga a su disposición, con arreglo a los procedimientos y normas que determine para el buen desempeño de sus funciones;"

148. Era evidente por lo tanto que las relaciones entre dos Estados independientes, o las controversias que pudieran existir entre ellos, no competían al Comité Especial. Todas las referencias y alusiones de los manifestantes a la actual controversia de fronteras entre Etiopía y Somalia, o entre Somalia y Kenia, en consecuencia, tenían que desestimarse como impertinentes y sin ninguna relación con la labor del Comité.

149. Los sucesos de la víspera en el aeropuerto y las calles de Mogadiscio eran sólo un pequeño ejemplo de lo que personas mal aconsejadas e ignorantes podían hacer cuando se las incitaba activamente. A juicio del orador, las manifestaciones efectuadas no habían hecho más que desacreditar el nombre de África. Esto lo decía más con pena que con cólera. Para eterna vergüenza de los dirigentes de Somalia, grandes nombres como los de Haile Selassie y Jomo Kenyatta, dos hijos ilustres de África, venerados y respetados en el mundo entero, habían sido vilipendiados impunemente en las calles de Mogadiscio. Era asimismo una muestra de la distorsión y tergiversación inculcada en la mente de los manifestantes que éstos hubiesen gritado contra el nombre de un dirigente europeo liberal tan grande y eminente como el General de Gaulle, mientras nada se decía contra Verwoerd, Salazar y Smith, los verdaderos enemigos y opresores de los pueblos africanos.

150. En cuanto a la declaración tan reiterada sobre la llamada división del pueblo somalí y la alusión a que existía el pueblo de origen somalí y un grupo étnico

somalí en Etiopía y Kenia, la delegación de Etiopía quería insistir nuevamente en que no tenía la intención de dejarse arrastrar a discusiones ajenas al tema y ociosas como ésa.

151. Esas frases y clisés estereotipados habían pasado a ser tan trillados que apenas podían disimular la meta y el objetivo reales del Gobierno de Somalia, a saber, su deseo de expansión y de agrandamiento territorial a expensas de Estados vecinos.

152. Palabras altisonantes, conceptos excelsos y términos como "libre determinación", "unificación", "independencia" y "libertad" se prostituían temerariamente en Somalia para significar, en la cruda realidad, expansión y agrandamiento territoriales, para cuya consecución el Gobierno de Somalia incitaba a nómadas y pastores inocentes en zonas remotas al asesinato, al saqueo y al pillaje.

153. Esta política del Gobierno de Somalia había sido denunciada y condenada por toda la opinión pública africana e internacional. Añadió que se habían aprobado resoluciones y declaraciones oficiales en las conferencias de Jefes de Estado africanos y en la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobiernos de los Países no Alineados, a fin de que todos los Estados africanos respetaran las fronteras que tenían en el momento de la independencia. Dijo que su delegación no veía la utilidad, por lo tanto, de que una cuestión ya zanjada se suscitara durante la visita del Comité Especial a Mogadiscio.

154. En vez de aferrarse obstinadamente a una política sin solvencia y desacreditada, esa delegación se atrevía a sugerir al Gobierno invitante que se armara de valor suficiente para renunciar de una vez por todas a su fútil ambición expansionista y para despejar la vía a una colaboración fructuosa y a relaciones de amistad entre los dos Estados africanos vecinos. Lo instó desde la sede de su propio parlamento, que tan cordialmente había puesto a disposición del Comité, a abrir los ojos a la realidad.

155. A este respecto, el Gobierno de Etiopía proponía al Gobierno de Somalia que trabajara como lo había hecho por la unidad más amplia del panafricanismo o aun del África Oriental, en lugar de porfiar inoportunamente sobre la denominada "unidad somalí", concepto que no sólo tenía un alcance demasiado estrecho para tener alguna utilidad en las exigencias del África moderna, sino que encerraba asimismo elementos anacrónicos y peligrosos de tribalismo y racismo.

156. La delegación de Etiopía creía que los dos países ganarían mucho de una relación de cooperación y amistad que llevase a la paz y a la estabilidad en la región. Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, había señalado reiteradamente este hecho a la atención de los líderes somalíes, aunque infructuosamente hasta la fecha. Sin embargo, los etiopíes eran un pueblo paciente y podían aguardar. El tiempo estaba de su parte.

157. La cuestión de Djibouti había sido una de las preocupaciones del *Somali News*, periódico oficial, y hasta cierto punto de los manifestantes. Como figuraba en el programa del Comité Especial y era un asunto que interesaba primordialmente a la delegación de Etiopía, se proponía participar activamente en el debate cuando se pusiera en discusión. Añadió que la opinión de su Gobierno al respecto era bien conocida del Comité y su delegación se reservaba el derecho a formular una declaración detallada sobre su actitud en el mo-

mento oportuno. Sin embargo, por el momento sólo deseaba poner en claro que Etiopía rechazaba totalmente cualquier reclamación sobre ese Territorio de parte de Somalia.

158. Con respecto a la cuestión de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, que aparecía igualmente en el programa del Comité Especial durante sus reuniones en Mogadiscio, la delegación de Etiopía tendría propuestas concretas que hacer llegado el momento de considerar los proyectos de resolución. Hasta ese instante, sin embargo, deseaba simplemente congratularse de la próxima independencia de la Isla Mauricio y expresar la esperanza de que el pueblo de las Islas Seychelles pudiese hacer otro tanto en una fecha cercana.

159. En conclusión, reiteró el agradecimiento de su delegación al Gobierno y al pueblo de Somalia por su invitación al Comité Especial y por la cordial acogida que le habían dado.

160. El Presidente deploró que el representante de Etiopía hubiese insistido en formular una declaración litigiosa sobre asuntos que no competían al Comité Especial. Coadyuvaría a la labor del Comité si, en lo sucesivo, los representantes se circunscribieran a las cuestiones inscritas en el programa.

161. El representante de la India agradeció al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia su invitación al Comité Especial para celebrar algunas de sus reuniones en Mogadiscio.

162. La India mantenía relaciones muy amistosas con Somalia; ambos pertenecían al grupo de países económicamente en desarrollo a la vanguardia de la lucha contra el colonialismo, y estaban empeñados en la empresa común de elevar el nivel de vida de sus pueblos. La India había enviado, en la medida de sus recursos, personal técnico capacitado, como médicos, ingenieros y maestros, para ayudar a Somalia en su desarrollo. La aportación de su Gobierno era un símbolo de la amistad genuina que existía entre los dos países.

163. El discurso elocuente del Primer Ministro era una importante contribución a la labor del Comité Especial. Recordando la comparecencia personal del Sr. Abdurizak ante el Consejo de Administración Fiduciaria hacía algunos años, como peticionario, el representante de la India declaró que su intervención ante el Comité Especial como Primer Ministro de su país mostraba el interés del Gobierno de Somalia en la lucha contra el colonialismo.

164. Para concluir, transmitió al pueblo de Somalia los cálidos saludos de su delegación y los deseos más sinceros por su constante bienestar y prosperidad.

165. El representante de Afganistán dio las gracias al Primer Ministro por su inspirado discurso, y al Gobierno y al pueblo de Somalia expresó su gratitud por su calurosa acogida y por permitir al Comité Especial que celebrara algunas de sus reuniones en Mogadiscio.

166. Los pueblos del Afganistán y de Somalia estaban ligados por aspiraciones y fuertes lazos espirituales comunes, que hacían particularmente satisfactorio para su delegación trabajar en la joven República de grandes tradiciones.

167. El representante de Australia agradeció al Gobierno y al pueblo de Somalia la memorable acogida brindada al Comité Especial, así como el discurso de apertura del Primer Ministro, cuyas palabras servirían

de inspiración y guía en la senda hacia una Africa libre del colonialismo y unida en aras de la dignidad humana.

168. El representante de Siria señaló que su delegación se adhería sin reserva a las declaraciones del Presidente en respuesta al discurso de apertura del Primer Ministro.

169. Las primeras palabras de bienvenida al Comité Especial escuchadas a su llegada a Mogadiscio, *As-salaam aleikum* (La paz sea contigo), eran un símbolo de fe en la paz basada en la justicia, la fraternidad humana, y la erradicación de todas las formas de colonialismo y explotación del hombre por el hombre; de fe en la inminencia de la igualdad y justicia absolutas en todas partes, y especialmente en Africa; y de fe en la verdadera emancipación del hombre, y en que éste asumiría la digna función que le había estado negada tanto tiempo como constructor activo del verdadero progreso y restaurador de valores e ideales.

170. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas agradeció sinceramente al Presidente de la República Somali, así como al Gobierno y al pueblo somalíes, la calurosa acogida que habían dado al Comité Especial.

171. El Gobierno somalí había expresado nuevamente su deseo de que se aplicara desde luego, en todos los países que estaban aún bajo el yugo colonial, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Casi todos los países de Africa y Asia se habían emancipado ya de la dominación colonial, salvo algunos, particularmente en Africa, donde millones de seres humanos continuaban siendo explotados y humillados. De ahí que el Comité Especial hubiese decidido celebrar esas reuniones en Africa. El orador estaba convencido de que los trabajos del Comité Especial en Somalia señalarían un nuevo progreso hacia la liquidación de los últimos vestigios del colonialismo en Africa. La Unión Soviética era amiga de los pueblos que luchaban por su libertad y siempre había apoyado los esfuerzos valerosos desplegados por los pueblos africanos con miras a obtener su independencia.

172. El representante de Túnez dio las gracias al Presidente de la República Somali, al Primer Ministro y al pueblo somalí por haber acogido tan cordialmente en Mogadiscio al Comité Especial. Su hospitalidad conmovedora era una nueva prueba de la confianza que tenían en las Naciones Unidas. Le había impresionado particularmente la alocución del Primer Ministro de Somalia, quien expresara con tanto talento las aspiraciones de su país. El papel que había desempeñado en diversas ocasiones Somalia, tanto en las Naciones Unidas como en la OUA y en los organismos especializados, era para ella una prenda particularmente brillante de éxito en lo sucesivo.

173. El representante de Sierra Leona declaró que su delegación hacía suyas las expresiones de agradecimiento del Presidente al Primer Ministro.

174. La propia Somalia había estado sometida al Régimen de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas y por lo tanto se hallaba en una situación única para comprender los sentimientos de los pueblos oprimidos. La invitación al Comité Especial para que se reuniese en Mogadiscio no había sido una mera casualidad, sino un símbolo de la promesa de Somalia de erradicar el colonialismo y de la fe del pueblo somalí en las Naciones Unidas. Sierra Leona compartía esa fe y seguiría esforzándose al máximo en la tarea de ex-

tirpar todas las formas de opresión tanto en Africa como en otras partes.

175. La delegación de Sierra Leona agradecía al Gobierno y al pueblo de Somalia su invitación al Comité Especial. La conciencia de que los somalíes hubiesen puesto su calidad de africanos por encima de su identidad nacional hacía que la delegación de Sierra Leona se sintiera como en su propio país con amigos íntimos en cuya compañía se podía luchar resueltamente por la meta de la descolonización y la paz en Africa.

176. El representante del Irán expresó al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia la gratitud de su delegación por haber invitado al Comité Especial a celebrar parte de sus reuniones en Mogadiscio. La acogida brindada al Comité Especial era una expresión de la confianza arraigada profundamente del pueblo de Somalia en las Naciones Unidas.

177. Añadió que su delegación había quedado muy impresionada por las sensatas e inspiradoras expresiones del Primer Ministro, nuevo indicio de la confianza que el Gobierno y el pueblo de Somalia tenían en las Naciones Unidas. La hospitalidad dada al Comité Especial era simbólica de los altos valores que Somalia había conocido en el curso de la historia, pues ésta había ligado a los pueblos de Somalia y del Irán con lazos de amistad, religión y cultura.

178. La representante de los Estados Unidos de América, hablando en nombre de su país, agradeció al pueblo y al Gobierno de Somalia su invitación al Comité Especial. La grata estimación de Somalia por las Naciones Unidas había quedado demostrada por el magnífico discurso de bienvenida del Primer Ministro y por las disposiciones adoptadas para facilitar los trabajos del Comité en Mogadiscio.

179. Somalia tenía una larga y estrecha asociación con las Naciones Unidas. Según había señalado en su discurso el Primer Ministro, Somalia era ejemplo de la asistencia que la comunidad internacional podía prestar para el traspaso ordenado del poder al pueblo.

180. Era un motivo de satisfacción que las Naciones Unidas prestaran asistencia técnica para el desarrollo social, económico y educativo de una Somalia orgullosamente independiente.

181. Como miembro del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas, los Estados Unidos se complacían en poder contribuir al desarrollo, en Somalia, de la agricultura, los servicios portuarios, las fuerzas civiles de seguridad y — quizá lo más importante para el porvenir del país — los establecimientos escolares y de formación de maestros.

182. En conclusión, transmitió los saludos y votos de éxito de los Estados Unidos al Gobierno y al pueblo de Somalia en sus nuevos progresos.

183. El representante de Venezuela se asoció a las palabras pronunciadas por el Presidente del Comité Especial en respuesta a la interesante alocución del Primer Ministro de Somalia. Agradeció al Gobierno y al pueblo somalíes la acogida calurosa e inolvidable dispensada a los miembros del Comité Especial. Rindió homenaje a ese pueblo tan valiente que tras obtener su independencia luchaba actualmente por ocupar su puesto en el seno de la colectividad internacional.

184. Venezuela conocía muy bien los problemas con que se enfrentaba Somalia, algunos de los cuales se re-

ferían a la soberanía y a los derechos inalienables de sus dos pueblos. Era la herencia dejada por la época colonial y que debería sin embargo desaparecer. De ahí que la delegación de Venezuela se felicitara de la decisión del Presidente, quien había aceptado que los miembros de la delegación somalí participaran en los trabajos del Comité Especial en calidad de observadores. Añadió que estaba convencido de que la participación de esa delegación ayudaría al Comité Especial a progresar en su tarea, es decir, la liquidación definitiva del colonialismo.

185. El representante de Bulgaria agradeció al Presidente de la República Somalí, así como al Gobierno y al pueblo somalíes, la acogida calurosa que habían dado al Comité Especial. Dio las gracias además, y muy en particular al Primer Ministro de Somalia por sus cordiales palabras de bienvenida, que mostraban toda la confianza que el Gobierno de Somalia depositaba en el Comité Especial. Somalia figuraba en primera fila entre los países africanos que desplegaban una lucha eficaz contra el colonialismo y el neocolonialismo, y participaba activamente en los trabajos de las Naciones Unidas y del Comité Especial, cuya tarea principal era asegurar la aplicación integral e inmediata de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

186. Desde su independencia, Somalia había logrado grandes progresos y, junto con hacer frente a múltiples dificultades, se esforzaba por mejorar el nivel de vida de su pueblo. No hacía falta señalar que Bulgaria, en su carácter de país socialista, se solidarizaba con los países africanos que luchaban por eliminar los últimos bastiones del colonialismo en Africa. Relaciones muy amistosas existían ya entre Bulgaria y Somalia, que fortalecían cada día más sus lazos económicos, culturales y de otra índole en provecho de ambos pueblos. Deseaba pleno éxito al Gobierno y al pueblo de la República Somalí y les agradecía su activa cooperación con el Comité Especial, así como la forma notable en que habían organizado los trabajos de este último en Mogadiscio.

187. El representante de Madagascar expresó su reconocimiento al Gobierno somalí por haber invitado al Comité Especial a celebrar parte de sus reuniones en el hospitalario suelo de Somalia. Le complacía en particular poder transmitir al Gobierno y al pueblo de la República Somalí los mejores deseos de su Gobierno, que siempre había defendido y continuaría defendiendo con celo el principio sagrado de la libre determinación.

188. Estaba convencido de que las tentativas hechas con miras a sofocar las aspiraciones legítimas de los pueblos que estaban aún bajo el yugo colonial repercutirían contra sus propios autores, pues los pueblos ya liberados no podrían admitir que sus hermanos continuaran indefinidamente explotados por Potencias extranjeras. No bastaba condenar al colonialismo, se necesitaba además y sobre todo eliminarlo del continente africano. La paz y la cooperación entre los miembros de la comunidad internacional sólo serían vanas palabras mientras la explotación de un pueblo por otro no hubiese dejado de existir por completo.

189. Estaba convencido de que los países africanos y todos los que creían en el valor de la dignidad humana continuarían mancomunando sus esfuerzos para liquidar totalmente al colonialismo y promover una

era de cooperación fructífera fundada en la igualdad y el desinterés.

190. El representante de Malí agradeció al Gobierno y al pueblo de la República Somalí la acogida muy fraternal y muy calurosa brindada al Comité Especial. La República Somalí había acometido con confianza y vigor los difíciles problemas que suscitaba el desarrollo y cada uno de sus pasos hacia adelante era una victoria sobre el imperialismo y el colonialismo.

191. La invitación dirigida al Comité Especial y el calor de la recepción de que éste había sido objeto mostraban claramente el deseo de todo el pueblo somalí de cooperar con las Naciones Unidas. Además, Somalia se esforzaba por acelerar la liberación de millones de africanos sometidos a la dominación colonial y al imperialismo. El colonialismo estaba ya condenado y debía desaparecer de Africa, a fin de que todos los pueblos de este continente pudieran armonizar sus esfuerzos para luchar contra el subdesarrollo.

192. El representante de la Costa de Marfil deseaba sumar su agradecimiento al de los oradores que habían expresado su gratitud al Gobierno y al pueblo de la República Somalí por la generosa invitación hecha al Comité Especial. A pesar de todos los problemas de desarrollo económico a que había de hacer frente, la República Somalí no había vacilado en invitar al Comité Especial a celebrar una parte de sus reuniones en Mogadiscio y no había escatimado esfuerzo alguno por hacer su estada en esta hermosa ciudad lo más agradable posible.

193. Con ello demostraba una vez más la importancia que atribuía a las Naciones Unidas en general y al Comité Especial en particular, así como la simpatía que sentía por los pueblos de los territorios que estaban aún bajo administración colonial. La Costa de Marfil, por su parte, se inclinaba en favor de la libre determinación de los pueblos y del traspaso progresivo y ordenado de poderes a sus representantes; se esmeraría en dar cumplimiento a los nobles ideales enunciados en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

194. El representante de Dinamarca se unió al reconocimiento del Presidente por el discurso del Primer Ministro y expresó la gratitud de su delegación por la bienvenida y hospitalidad dadas al Comité Especial. Sin duda esa bienvenida era una clara prueba del interés y la confianza de Somalia en las Naciones Unidas. Los países más pequeños deberían reconocer en las Naciones Unidas a la única verdadera perspectiva de paz y bienestar. Como había manifestado el Primer Ministro, al visitar Africa el Comité estaba en mejores condiciones de evaluar la situación, y esa experiencia estimularía al Comité en su determinación de luchar por los derechos y la libertad en todas partes.

195. El representante de Polonia asoció a su delegación a la respuesta del Presidente al discurso de apertura pronunciado por el Primer Ministro, y agradeció al Gobierno y al pueblo de Somalia su invitación al Comité Especial para celebrar algunas de sus reuniones en otro país africano independiente amante de la paz. Añadió que su delegación estaba asimismo profundamente conmovida por la calurosa recepción, la hospitalidad y las facilidades otorgadas al Comité.

196. Como Polonia y Somalia estaban unidas por vínculos de amistad y cooperación, le complacía particularmente visitar Mogadiscio. Somalia había sido uno de los copatrocinadores de la Declaración sobre la con-

cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales; y el discurso del Primer Ministro era una expresión de los nobles propósitos consignados en la Carta de las Naciones Unidas y de la firme determinación del pueblo de continuar asociado a los esfuerzos de la comunidad internacional, y del Comité Especial en particular, para poner rápido e incondicional fin al colonialismo. Polonia estimaba que la erradicación del colonialismo en Africa y en todas partes era un acto de justicia histórica. Cada día era más evidente que la existencia del colonialismo — agresivo por su propia naturaleza — y la tenaz persistencia de las Potencias coloniales en oprimir, explotar y subyugar a los pueblos dependientes era una violación manifiesta de los derechos y aspiraciones legítimas de los pueblos a la libertad y la independencia, un obstáculo en la senda de la cooperación internacional y una amenaza a la paz mundial. Por tanto, Polonia prestaba incansable apoyo a la lucha justa de los territorios dependientes para emanciparse de las cadenas de la dominación extranjera.

197. En conclusión, reiteró el agradecimiento de su Gobierno al pueblo de Somalia por su cordial acogida y hospitalidad y formuló votos fervientes por su bienestar y prosperidad.

198. El representante de Chile sumó su agradecimiento al que había expresado el Presidente al Gobierno de la República Somalí. Le había impresionado mucho la acogida calurosa que había recibido el Comité a su llegada a Mogadiscio y el interés que atribuía el pueblo somalí a los trabajos de las Naciones Unidas en general y a los del Comité Especial en particular. El notable discurso pronunciado por el Primer Ministro de Somalia era una nueva prueba de ello.

199. La cordial invitación del Gobierno de Somalia dio al Comité Especial la posibilidad, por una parte, de conocer un país que luchaba por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y, por otra parte, de proseguir la tarea de descolonización que le incumbía con ocasión de este nuevo viaje a Africa. Chile, que en cierta época también había vivido sometido al sistema colonial, asignaba una importancia muy particular a la lucha contra el colonialismo y contra toda forma de opresión. El Gobierno chileno seguía con interés los progresos obtenidos por Somalia desde su independencia y le formulaba sus votos sinceros de éxito.

200. El representante de Yugoslavia adhirió a su delegación a la declaración formulada por el Presidente en respuesta al inspirado discurso del Primer Ministro. Expresó asimismo la gratitud de su Gobierno al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia por haber invitado al Comité Especial a celebrar algunas reuniones en Mogadiscio.

201. La circunstancia de que Yugoslavia mantuviese relaciones de amistad con Somalia hacía que su delegación se sintiera muy satisfecha de encontrarse en Mogadiscio. Creía que los trabajos del Comité Especial allí darían nuevos resultados positivos en el proceso de descolonización en Africa y en otras partes, y que permitirían a los miembros del Comité conocer mejor al pueblo de Somalia y sus esfuerzos en pro de la reconstrucción económica y social.

202. Para terminar, transmitió los fervientes votos de su país al Gobierno y al pueblo de Somalia por el éxito en los esfuerzos que desplegaban por forjar la prosperidad y un mejor porvenir para su hermoso país.

203. El Ministro de Relaciones Exteriores de Somalia dio las gracias a los miembros por sus observa-

ciones y asimismo dio la bienvenida al Comité Especial como paladín de la libertad y amigo de la paz. El pueblo y el Gobierno de la República Somalí deseaban éxito al Comité en su búsqueda de la verdad sobre el gran problema planteado al Comité, problema que, en realidad, se planteaba el mundo entero. El Gobierno de Somalia tenía conciencia de la responsabilidad del Comité y estaba plenamente dispuesto a prestarle asistencia en esta importante tarea, particularmente en el caso de Somalia Francesa, sobre el cual era más fácil para su Gobierno expresar su opinión en detalle, puesto que se trataba de uno de los tres territorios somalíes que aún estaban bajo dominación extranjera.

204. La ciudad de Mogadiscio era la capital de dos antiguas colonias, Somalia Italiana y Somalia Británica. El 1° de julio de 1960 ambas Somalias habían logrado su independencia y unificación. El deseo de unión de los somalíes que vivían en las dos antiguas colonias había sido totalmente espontáneo. Como habían luchado por su libertad y unificación contra Gran Bretaña e Italia, siempre habían apoyado y continuarían apoyando a los hombres y mujeres que luchaban por la libertad y la justicia. Tenían el convencimiento de que a menos que prevaleciera la justicia no habría una paz permanente para la humanidad. Había que eliminar en primer término las causas de las injusticias y establecer una base sólida, apoyada en los principios de la igualdad y de la libre determinación, como fundamento de la paz mundial que, sin este fundamento, se levantaría sobre arena movediza. El Comité Especial simbolizaba la aurora de una nueva era. Su trabajo contribuiría a la liberación de millones de seres humanos que todavía permanecían bajo el yugo de la dominación colonial en Rhodesia del Sur, Sudáfrica, Mozambique, Angola, Somalia Francesa, Arabia Meridional, Africa Sudoccidental, Guinea Portuguesa y otras partes del mundo. La historia reciente de la lucha de los hombres por la libertad y los acontecimientos en Africa, Asia y América Latina hacían nacer la gran esperanza de que el mundo progresara hacia la libertad y de que el colonialismo en todas sus formas estaba condenado a desaparecer.

Clausura de reuniones

Declaraciones generales

205. El representante de la República Unida de Tanzania, hablando en nombre de los países de Asia y Africa y de Yugoslavia, agradeció al Gobierno y al pueblo de la República Somalí su cordial hospitalidad y, por sobre todo, la ayuda que habían prestado al Comité Especial para el cumplimiento de sus fines, es decir, la erradicación del colonialismo y la liberación del hombre en Africa y en todas partes.

206. La resolución 1514 (XV) aprobada por la Asamblea General en 1960, había sido un paso positivo; pero nadie había exagerado su valor y, conforme a las palabras del Primer Ministro de Somalia, la lucha contra los enclaves restantes del colonialismo podría resultar la más difícil de todas.

207. El problema del colonialismo debería ser atacado desde todos los ángulos, pero siempre con el mismo propósito: derrotar al colonialismo y poner fin a la explotación del hombre por el hombre. La lucha por la libertad y la independencia era también la lucha por la paz, porque mientras existiera el colonialismo no podría haber verdadera paz en el mundo.

208. La política de apartheid en Sudáfrica y en el Africa Sudoccidental, la política de aniquilamiento de Portugal y las matanzas de africanos en Rhodesia del Sur eran crímenes contra la humanidad. Y sin embargo nadie ignoraba que aunque las fuerzas que cometían esas atrocidades eran viles y criminales en sí mismas, eran a su vez instrumentos del imperialismo, que no se detendría ante nada para aprovechar los recursos del Africa y explotar la mano de obra africana. Los estudios hechos por el Comité Especial habían demostrado que los monopolios financieros extranjeros impedían a los pueblos de esos territorios alcanzar su libertad y su independencia. Era inevitable, por consiguiente, que la lucha contra el colonialismo entrañara un choque de intereses, con la resultante amenaza a la paz.

209. Los países de Asia y Africa y Yugoslavia condenaban categóricamente el colonialismo, respetaban los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos y continuarían sus esfuerzos para hacer efectiva la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

210. Dos eran los métodos principales que podían seguirse para poner fin al colonialismo. El primero era el de la persuasión, seguido en el caso del Africa Sudoccidental, por ejemplo. Este había sido el procedimiento escogido por las Naciones Unidas y que había llevado a la creación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, del Consejo de Administración Fiduciaria y, finalmente, del Comité Especial. Con arreglo a ese método se instaba incesantemente a las Potencias coloniales a renunciar a sus colonias y establecer un programa para su independencia; pero las condiciones de dicha independencia habían sido establecidas en la resolución 1514 (XV). Hasta el presente el método de persuasión no había tenido mucho éxito.

211. Quedaba entonces el segundo camino: la amarga lucha, cuya historia se escribiría con la sangre de los combatientes por la libertad.

212. El representante de la República Unida de Tanzania estaba seguro de que todos los pueblos amantes de la paz preferirían que se siguiera el primer procedimiento, pero las Potencias coloniales no atendían a razones. Su falta de cooperación había hecho vacilar ya la fe de muchos africanos en las Naciones Unidas. Sería muy de lamentar verdaderamente que el Comité Especial, por ejemplo, llegase a ser considerado como un órgano que sólo servía para aprobar resoluciones.

213. Como la experiencia había demostrado, la acumulación de frustraciones no dejaba eventualmente a los pueblos subyugados más alternativa que luchar hasta el fin. Eso había ocurrido en Argelia, en Kenia y en muchas otras partes del mundo, y era lo que estaba en realidad ocurriendo en Mozambique, en Angola y en otras partes de Africa en aquel momento.

214. Sabía que expresaba los sentimientos, no sólo de los miembros de Asia y Africa y de Yugoslavia del Comité Especial, sino también del pueblo pacífico de Somalia, cuando advertía a las Potencias coloniales que habían de reconocer lo ineludible y evitar el derramamiento de sangre. Los africanos estaban decididos a libertar a sus hermanos a cualquier precio y lucharían hasta el fin. Las Potencias coloniales no podían cambiar el curso de la historia.

215. Aseguró a los combatientes por la libertad que se habían presentado al Comité Especial que serían apoyados en sus legítimas reclamaciones, y les instó a man-

tener su unidad de propósito y acción. Como había dicho el Presidente Nyerere: "Ustedes, nuestros hermanos que se hallan aún bajo el yugo colonial deben luchar, porque de lo contrario serían unos cobardes. Y aquellos de nosotros que somos ya independientes, debemos ayudarles aunque esto signifique derramamiento de sangre. Si no lo hiciéramos así seríamos también unos cobardes."

216. El orador rogó al pueblo de Somalia que recordara que los africanos no podían descansar hasta que toda el África estuviera libre del colonialismo. Estaban firmemente decididos a derrotar a las fuerzas del apartheid, a borrar al colonialismo portugués de la faz de la tierra, a aplastar el régimen racista de la minoría en Zimbabue y a eliminar el colonialismo francés en Somalia Francesa. Los combatientes por la libertad debían continuar luchando y sus amigos harían todo lo posible para que las Naciones Unidas los ayudaran a recobrar la libertad perdida. La libertad era indivisible y no podía separarse de la paz.

217. Para terminar, en nombre de los miembros de Asia y África del Comité y de Yugoslavia, agradeció al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia su cordial hospitalidad y dijo que su entusiasmo serviría para recordar a las Potencias coloniales cuán decididos estaban los africanos a lograr la libertad del continente.

218. El representante de Chile, hablando en nombre de las delegaciones de Venezuela y de Chile dio las gracias al Gobierno de la República Somalí por su invitación al Comité Especial para celebrar una parte del período de sesiones en Mogadiscio. Aseguró que Venezuela y Chile no ahorrarían esfuerzo alguno para ayudar a que triunfaran en todo el mundo los ideales de las Naciones Unidas.

219. Agradeció asimismo al Presidente de la República Somalí y al pueblo somalí su amabilidad y cordialidad, que no podría olvidar jamás.

220. El representante de Etiopía se unió a los representantes de Tanzania y de Chile para agradecer al Gobierno y al pueblo de Somalia la hospitalidad concedida al Comité Especial.

221. Las palabras que se habían cambiado entre el orador y el Ministro de Relaciones Exteriores de Somalia no serían obstáculo a sus fraternales relaciones, tanto personales como oficiales. Esos intercambios eran en realidad una demostración de la amplitud de criterio con que Etiopía y Somalia encaraban sus problemas comunes. Las diferencias sólo eran una etapa temporaria que sería superada porque los lazos de amistad existentes eran eternos. Su delegación llevaría consigo felices recuerdos de la hospitalidad recibida, de las nuevas amistades hechas y de las relaciones renovadas. Confía en que esas relaciones florecerían en una amistad más profunda y más grande.

222. Finalmente expresó el agradecimiento de su delegación al Gobierno de Somalia y la esperanza de que Etiopía y Somalia florecieran en la amistad y en la libertad para el mayor bien de toda África.

223. El representante de Polonia, hablando en nombre de las delegaciones de Polonia, la URSS, Bulgaria y Checoslovaquia, dio las gracias al Gobierno y al pueblo de Somalia por su amabilidad y su hospitalidad.

224. Las reuniones del Comité Especial habían sido siempre fuentes de inspiración y el representante de Polonia creía que se estaban haciendo progresos en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-

pendencia a los países y pueblos coloniales. Le había impresionado mucho la determinación de los pueblos africanos, como lo demostraba la conmovedora exposición del Primer Ministro, de luchar por la libertad y la independencia. La obstinación con que las Potencias coloniales se oponían a esas justas aspiraciones era sumamente peligrosa. El Comité Especial estaba obligado a apoyar el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, y la mejor forma de recordar a las Potencias imperialistas esa determinación era mostrar un frente unido contra la opresión colonial.

225. El representante de Italia, hablando en nombre de las delegaciones de Australia, Dinamarca y los Estados Unidos y de su propia delegación, agradeció al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia su hospitalidad y su cordial acogida. Los miembros del Comité Especial habían tenido la oportunidad de admirar durante su breve y agradable estancia en Mogadiscio, el progreso hecho por Somalia en sus seis años de independencia, y habían podido también llevar adelante la importante tarea que les habían confiado las Naciones Unidas de conformidad con la Carta y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El orador presentó al Gobierno y al pueblo de Somalia sus mejores votos de felicidad y prosperidad en el porvenir.

226. El representante del Secretario General, hablando en nombre de todos los miembros de la Secretaría, dio las gracias al Gobierno y al pueblo de Somalia por su generosa hospitalidad y por todos los servicios que habían puesto a disposición del Comité Especial durante la visita a Mogadiscio. Los Ministros del Gobierno, el Jefe del Gabinete de la Oficina del Primer Ministro y los embajadores de Somalia que habían asistido a las reuniones del Comité en Mogadiscio, para nombrar sólo a algunos de ellos, habían contribuido a facilitar los trabajos de la Secretaría y a hacer sumamente placentera su estancia en Mogadiscio.

227. El Presidente del Comité Especial dio las gracias al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Somalia en nombre de todos los miembros del Comité. La visita del Comité a Mogadiscio, que había sido sumamente constructiva, le había permitido comprender mejor el significado de la lucha de los pueblos coloniales para recobrar la independencia y había demostrado la preocupación de las Naciones Unidas y del Comité Especial por esos pueblos. Posiblemente el aspecto más importante del trabajo de las Naciones Unidas, como lo demostraba la visita del Comité a varias capitales africanas, era su participación en la cuestión de la descolonización. La cordial acogida del pueblo somalí al Comité era particularmente significativa ya que, como tan amablemente había dicho el Primer Ministro, Somalia debía en buena parte su independencia a la obra de las Naciones Unidas. Además, como resultado de su visita a Mogadiscio el Comité había podido obtener más información de los peticionarios sobre la situación en Somalia Francesa y en Adén.

228. El Presidente se sumó a los oradores que le habían precedido para expresar su sincera esperanza de que el Comité Especial contribuyera en gran medida al logro de la independencia de los territorios coloniales.

Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Somalia

229. El Ministro de Relaciones Exteriores de Somalia agradeció al Presidente y a los miembros del

Comité Especial sus generosas palabras de agradecimiento y dijo que el Gobierno y el pueblo de Somalia se sentían muy honrados de haber recibido al Comité, aunque sólo fuese por un breve período de tiempo. Durante sus reuniones en Mogadiscio el Comité había podido enterarse de las aspiraciones de los pueblos de Somalia Francesa y Arabia Meridional, si bien cabía lamentar que no hubieran podido presentarse los peticionarios de las Islas Seychelles y de la Isla Mauricio.

230. La llegada del Comité Especial a Mogadiscio había sido causa de regocijo por haber permitido a la población de Somalia Francesa expresar sus puntos de vista sin temor ni favoritismo. Además, todos los somalíes tenían un respeto muy especial por las Naciones Unidas, bajo cuya dirección su país había pasado del Régimen de Administración Fiduciaria a la independencia soberana, y estaban muy agradecidos por la ayuda que la Organización continuaba dándoles. El pueblo somalí que seguía aún bajo el dominio extranjero estaba persuadido de que sus presentaciones recibirían toda la atención del Comité y de que éste no se dejaría llevar por presiones del exterior sino que obedecería únicamente a su convencimiento del derecho inalienable del pueblo de Somalia Francesa a la libre determinación y la independencia. La llegada del Comité a Africa había sido aguardada durante mucho tiempo por los millones que aún sufrían bajo el dominio colonial, y porque el Comité era un símbolo de la libertad y la dignidad de la humanidad y representaba los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

231. El Sr. Dualeh agradece finalmente al Comité Especial, en nombre del pueblo y el Gobierno de Somalia, la paciencia y la comprensión demostrada durante sus deliberaciones en Somalia y le desea todo éxito en su humanitario propósito de liberar a los que aún se hallan bajo la dominación extranjera. Expresa también su reconocimiento al Presidente por autorizar la participación de observadores de Somalia en los debates del Comité celebrados en Mogadiscio y en Addis Abeba. Somalia ansía contribuir a la causa de la libertad y no ahorrará esfuerzo para llevar adelante la liberación de todos los pueblos subyugados.

C. REUNIONES CELEBRADAS EN ADDIS ABEBA, ETIOPÍA

Apertura de las reuniones

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores en nombre de Su Majestad Imperial el Emperador de Etiopía

232. El Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, al dar la bienvenida al Comité en Addis Abeba expresó la esperanza de que sus deliberaciones fueran fructíferas y constituyeran otro paso hacia la liberación de los países y territorios todavía en estado de dependencia.

233. A continuación leyó el siguiente mensaje, dirigido al Comité Especial por Su Majestad Imperial Haile Selassie I:

“En nuestro nombre, en nombre de nuestro Gobierno y del pueblo de Etiopía, nos complace dar la bienvenida una vez más a los distinguidos miembros del Comité Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar la situación con respecto a la

aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

“No puede exagerarse la importancia de este Comité. Su valor intrínseco reside en sus intentos para promover, por intermedio de las Naciones Unidas, el logro de uno de los derechos humanos fundamentales, que es el de conducir a la libertad y la independencia a los pueblos y países todavía bajo el yugo colonial. Todos sabemos que la lucha por la libertad puede terminar y siempre terminará en la victoria. Como el propósito de este Comité es la libertad, su propósito será obtenido. El problema no es el de decidir si corresponde la libertad, sino más bien el de la mejor manera de conseguirla. En esta forma, la principal preocupación de este Comité es la de sugerir medios y métodos para lograr lo mejor posible este propósito.

“El Comité encuentra problemas gigantescos en la elección de los medios. Tenemos conciencia de la existencia de fuerzas opuestas en acción: por una parte, las fuerzas que incansablemente buscan la libertad y, por la otra, las fuerzas de la opresión que tratan de disuadir la libertad. Un ejemplo típico de este conflicto de fuerzas es el Gobierno ilegal de Rhodesia. Salvo los proponentes de la injusticia, tales como Sudáfrica y Portugal, todos los Estados amantes de la libertad han condenado a este Gobierno racista inhumano. Confiamos en que se establecerá en Zimbabue el gobierno de la mayoría. ¿Pero cómo y cuándo? Aquí es donde debe intervenir el Comité y sugerir métodos. Como las medidas que se han ensayado para derribar el Gobierno ilegal parecen haber sido ineficaces, este Comité deberá considerar otros métodos, métodos que tal vez podamos adoptar de concierto. Por difícil que pueda ser la elección, confiamos en que los miembros de este Comité sabrán cumplir la enorme tarea que se les ha confiado.

“Sabemos que mientras haya hombres que creen que una raza es superior a la otra y de que pueden decidir los destinos de otros hombres por cualquier medio, no habrá paz. Mientras siga existiendo el irredentismo infundado y la interferencia en los asuntos internos de otros Estados, seguirá no habiendo paz. Sólo mediante la adhesión a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de la Unidad Africana podremos lograr nuestros propósitos y nuestra unidad se hará más sólida. Por nuestra parte, os aseguramos que nunca descansaremos en nuestros esfuerzos para libertar a nuestros hermanos que aún sufren el yugo del colonialismo.

“Sabemos que la tarea que se os ha encargado no es fácil, pero esperamos y rogamos que Dios quiera guiaros en vuestras deliberaciones.”

234. Al agregar su propia expresión de aprecio por el trabajo del Comité Especial, el orador declaró que Etiopía — Miembro de las Naciones Unidas y del Comité Especial desde su creación — siempre había hecho todo lo posible para contribuir a que sus deliberaciones fueran fructíferas. Como su propio país había experimentado cinco años de severa dominación colonial, nunca había vacilado en prestar ayuda moral y material a los pueblos que luchaban por la independencia, y su delegación continuaría prestando apoyo efectivo a la tarea del Comité.

Declaración del Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana

235. El Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana se manifestó orgulloso de poder asociar la OUA a las muchas voces que, de Dar es Salaam a Addis Abeba, pasando por Mogadiscio, habían acogido al Comité Especial en África y le habían expresado, junto con su alegría, la ferviente esperanza de África en el éxito total de su misión de descolonización.

236. En Addis Abeba, sede de la OUA, el personal de la secretaría general de la Organización se regocijaba muy particularmente por la feliz iniciativa tomada por el Comité Especial de realizar una vez más este peregrinaje a las fuentes que le permitirían apreciar la extrema gravedad de la situación creada en África por la supervivencia del régimen colonial y la imperiosa necesidad de poner término a las aventuras coloniales y racistas contra las cuales se había visto obligado a erigirse el conjunto de los pueblos africanos y sus dirigentes.

237. A través del Comité Especial, el orador quería expresar a las Naciones Unidas no sólo la fe y la confianza de la OUA, sino también la impaciencia y las inquietudes legítimas de los pueblos africanos ante la lentitud del proceso de descolonización pacífica desarrollado bajo los auspicios de la comunidad internacional. No se le escapaba que, para las Naciones Unidas, desde hacía casi seis años la descolonización había sido resuelta, en el plano de los principios, por la aprobación de la Declaración histórica del 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia incondicional a todos los territorios y a todos los pueblos que todavía seguían bajo dominio extranjero. La aprobación de esta Declaración, así como la institución en 1961 del Comité Especial encargado de buscar las vías y los medios más rápidos y eficaces para poner en práctica efectiva la política de descolonización definida en esa forma, habían despertado en todas partes del mundo y, en particular, en África, inmensas esperanzas y un particular fervor cuya sinceridad y profundidad eran reconocidas.

238. Instrumento de cooperación concertada de los Estados independientes de África, la OUA había sido concebida y organizada en el mismo espíritu de confianza y de fervor que caracterizaba los sentimientos de África frente a las Naciones Unidas, su Carta, sus diversas organizaciones y, naturalmente, el Comité Especial. Los Jefes de Estado y de Gobierno Africanos habían asignado a la descolonización una prioridad absoluta, puesto que la liberación era una condición previa a la realización de todas las aspiraciones de los Gobiernos y de los pueblos africanos. Esta profunda realidad había sido reafirmada solemnemente en todo el continente hacia apenas unos días, con motivo del Día de la Liberación de África, que marcaba el tercer aniversario de la firma de la Carta por la cual se había creado la Organización de la Unidad Africana.

239. No era solamente porque esta tarea de liberación constituía uno de los objetivos fundamentales y una de las preocupaciones constantes de la OUA, sino también porque la cooperación entre la OUA, por una parte, y las Naciones Unidas en general y el Comité Especial en particular, por la otra, había funcionado perfectamente en el curso del año transcurrido, que la OUA se proponía cambiar este año la forma de su contribución a las deliberaciones de Addis Abeba.

240. El orador y sus colaboradores se ponían a disposición del Comité Especial, para prestar asistencia como observadores en los debates que se celebrarían sobre cada uno de los temas inscritos en el programa, y también para participar en cualquier otro intercambio de puntos de vista que se considerase útil sobre los temas que interesaban en común al Comité Especial y a la OUA. La OUA estaba dispuesta a cooperar con el Comité Especial en la medida de lo posible, en razón de la estrecha solidaridad que vinculaba a África con la comunidad internacional en la obra de descolonización, a la cual la OUA consagraba lo mejor de sí misma.

241. Al Secretario General Administrativo de la OUA le satisfacía que el Comité Especial hubiese decidido incluir en su programa la cuestión de la liberación de los pequeños territorios aún dependientes de los enclaves coloniales diseminados a través del continente africano. La suerte de estos pequeños territorios interesaba a la OUA por la misma razón que le interesaba la suerte de las grandes colonias: porque se planteaba una cuestión de principio. La descolonización a la cual aspiraba la OUA, y para la cual trabajaba, debería aplicarse al conjunto de los territorios africanos, grandes o pequeños, ricos o pobres. Los pueblos africanos no estarían totalmente satisfechos sobre este punto sino cuando el último milímetro cuadrado de suelo africano hubiese sido quitado de las manos de toda autoridad ajena a África.

242. Añadió que se hacía un deber, al respecto, de poner en conocimiento del Comité Especial lo que le acababa de señalar el Secretario del Comité de Liberación de la OUA en Dar es Salaam: las Islas Comoras habían sido omitidas no solamente de la lista de pequeños territorios africanos sobre los cuales el Comité Especial tenía la intención de concentrar su atención, sino igualmente de la lista general de territorios dependientes elaborada por el Comité. Persuadida de antemano de que, si se confirmaba esta omisión, no podía tratarse más que de un error material o de un olvido involuntario, la OUA agradecería al Comité Especial que procediese a la rectificación necesaria. Era totalmente evidente que las Comoras formaban parte de las islas vecinas de África y, en virtud de los términos de su mandato, la competencia del Comité Especial se extendía al conjunto de los territorios dependientes, sean cuales fueren, por otra parte, los vínculos jurídicos que pudieran unir a estos territorios con las Potencias coloniales que los ocupaban.

243. Lo que resaltaba ante todo en la situación presente de África era la agravación de la amenaza a la paz y a la seguridad internacionales constituida no sólo por la supervivencia del colonialismo, sino por el fortalecimiento producido en el curso del año transcurrido en la alianza de Portugal, de Sudáfrica y de los colonos de Rhodesia para consolidar su apoderamiento de toda la parte meridional del continente africano y asegurar allí la perpetuidad de la dominación colonial y racista. Era un hecho que esta alianza impía de los regímenes de opresión más retrógrados, condenados los tres unánimemente por las Naciones Unidas en varias oportunidades, a pesar de todo gozaba del beneficio de complicidades poderosas. Estas complicidades eran las de las múltiples fuerzas, los individuos, sociedades o Estados que habían procedido a hacer inversiones en el sur del continente, que vivían de la explotación de las riquezas africanas en esas regiones y asumían así gran parte de la responsabilidad del

empeoramiento de la situación y del drama sangriento vivido por la población de Sudáfrica, la de Rhodesia del Sur y la de los territorios bajo dominación portuguesa. Lo que hacía falta en materia de descolonización no eran nuevas resoluciones, sino soluciones.

244. Las guerras coloniales impuestas a los pueblos africanos, las múltiples represiones, las diversas formas de vejamen y de humillación que en casi todas partes habían forzado a las víctimas africanas a tomar las armas, todo comprobaba, en la fase actual de la descolonización, la agravación de la amenaza que el colonialismo hacía pesar en África sobre la paz y la seguridad internacionales. Esta situación ponía necesariamente en tela de juicio la responsabilidad de las grandes Potencias, guardianas de la paz en el mundo en virtud de los términos de la Carta de las Naciones Unidas. El Comité Especial debería consagrar una parte notable de sus esfuerzos a poner de relieve esta responsabilidad de las grandes Potencias para convencerlas, antes que fuese demasiado tarde, de que extinguieran los incendios que el colonialismo y sus aliados seguían encendiendo en muchas partes de África.

245. Todo lo precedente fortalecía la convicción de la OUA de que el Consejo de Seguridad debería asumir su responsabilidad concreta en el drama que se desarrollaba en África y que podría ensangrentar al mundo entero. Se sabía que los intereses materiales que sostenían directa o indirectamente en África a los regímenes colonialistas y racistas eran los que paralizaban también al Consejo de Seguridad y hasta la fecha le habían impedido responder al anhelo de los pueblos oprimidos de África. Pero nada, ni aun las repetidas decepciones provocadas por los recientes debates realizados en el Consejo de Seguridad sobre Rhodesia del Sur, nada suprimiría totalmente la esperanza de ver que las Naciones Unidas hacían frente a sus responsabilidades en África.

246. Convenía recordar que había sido su complacencia y su inacción ante la agresión de Italia fascista contra el pueblo africano de Etiopía lo que había puesto a la Sociedad de las Naciones en la pendiente fatal que hubo de conducirlo rápidamente a una poco gloriosa caída. Era necesario que las Naciones Unidas meditaran sobre este ejemplo y que el Consejo de Seguridad evitara hacerle correr la suerte de la Sociedad de las Naciones.

247. El Comité Especial podía y debía desempeñar un gran papel al respecto insistiendo, contra viento y marea, en que el Consejo de Seguridad, ante la amplitud y la gravedad del problema planteado por el colonialismo y el racismo, fuera a deliberar en África para que comprendiera mejor, en contacto con las realidades africanas, que tiene simplemente que actuar y actuar pronto. Era dudoso que los debates académicos celebrados en Nueva York, sean cuales fueren la fe y el valor que animaran a los africanos y a sus amigos, consiguieran hacer que el Consejo de Seguridad cambiara de actitud. Pero la celebración de reuniones del Consejo de Seguridad en África permitiría tal vez lograr el cambio deseado en tiempo oportuno.

Declaraciones generales

248. El Presidente expresó el profundo agradecimiento del Comité Especial por el alentador discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, pronunciado en nombre de Su Majestad Imperial el Emperador de

Etiopía. La prolongada, amarga, pero victoriosa lucha de Su Majestad Imperial y del Gobierno y pueblo de Etiopía para salvaguardar la independencia de su país, así como su dedicación a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, serían una fuente de inspiración para el Comité.

249. Asimismo expresó gratitud por la cordial bienvenida y abierta hospitalidad ofrecidas al Comité Especial. La historia de esa hospitalidad se remontaba a los tiempos bíblicos y era verdaderamente africana en su generosidad. Muchos miembros habían tenido el privilegio de visitar Etiopía en varias ocasiones, de formar estrechos vínculos fraternales con su pueblo; el placer que tenían en la ocasión presente era compartido por quienes visitaban Etiopía por primera vez.

250. El Comité Especial había aceptado con sincera satisfacción la invitación del Gobierno de Etiopía de celebrar algunas de sus sesiones en Addis Abeba. El hecho de que esa fuera la tercera de esas invitaciones era testimonio de la importancia que atribuía el Gobierno de Etiopía a la tarea del Comité, mientras que la presencia por tercera vez del Comité en Addis Abeba, a su vez, probaba la estima que tenía el Comité por la contribución continua del Gobierno de Etiopía a la total y rápida eliminación del colonialismo.

251. Correspondía que el Comité Especial se reuniera en el África Hall donde, en mayo de 1963, se había firmado la Carta de la OUA, y que había sido testigo de gran número de decisiones importantes y trascendentales de la OUA encaminadas a la liberación de todos los Territorios todavía bajo dominio colonial en África. El orador confiaba en que el Comité fuese estimulado por el ejemplo de la OUA y, a su vez, aportara nuevas contribuciones efectivas a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

252. La labor del Comité Especial en África, hasta la fecha, había sido constructiva. Se habían escuchado renovados testimonios del grave deterioro de la situación en Rhodesia del Sur y del reprensible fracaso del Gobierno del Reino Unido en la adopción de medidas eficaces para terminar la rebelión del régimen minoritario racista y el establecimiento de condiciones democráticas sobre la base de un voto por persona, con objeto de conceder rápidamente la independencia. Se había aprobado una importante resolución (A/AC.109/167) que, si se ponía en práctica, llevaría a la liquidación del régimen colonial en Rhodesia del Sur.

253. También se habían escuchado nuevas demostraciones de las condiciones intolerables bajo las cuales padecían los pueblos de Angola y Mozambique, de los actos criminales ejecutados por los portugueses y de su flagrante negativa a aplicar el principio de la libre determinación.

254. Se habían oído valiosos testimonios relativos a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, que subrayaban la necesidad de garantizar su progreso hacia la independencia en forma incondicional y de conformidad con las aspiraciones del pueblo.

255. También se habían escuchado peticionarios que habían hablado sobre Somalia Francesa, proporcionando informaciones útiles que deberían ser de ayuda para la consideración objetiva de la cuestión.

256. El orador confiaba en que las deliberaciones en Addis Abeba del Comité Especial respecto del África Sudoccidental, Basutolandia, Bechuania y Swazi-

landia, Ifni y el Sáhara Español y Somalia Francesa tendrían resultados positivos y fructíferos.

257. El Presidente, respondiendo al Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana, recordó la resolución del Comité Especial de 18 de junio de 1965 (A/6000/Rev.1², cap. II, párr. 463) donde se expresaba la esperanza de que se intensificara la cooperación entre el Comité y la Organización de la Unidad Africana, y la resolución 2011 (XX) de la Asamblea General de 11 de octubre de 1965, aprobada en su vigésimo período de sesiones sobre el mismo tema. A la luz de esas resoluciones, el Comité estaba especialmente satisfecho por la presencia del Secretario General Administrativo de la OUA, cuya reseña de la posición de su Organización frente a los diferentes problemas de la descolonización en África había sido tan ponderable. El Comité asignaba gran importancia a la colaboración con la OUA en el logro del objetivo común de la eliminación total y rápida del colonialismo.

258. El representante de Dinamarca expresó la gratitud de la delegación de Dinamarca a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía por haber invitado al Comité Especial a Addis Abeba, capital de un pueblo orgulloso con una larga y gloriosa historia, y centro de las actividades de la OUA.

259. Aunque la unidad económica y política de África todavía era, tal vez, un objetivo remoto, el Comité Especial había tenido pruebas diarias de que los africanos libres estaban unidos en su lucha por la libertad de sus hermanos bajo la dominación colonial. El orador, que esperaba que la larga y dura campaña, como la del mundialmente famoso corredor etíope de la maratón, llegaría a una conclusión victoriosa, transmitió los mejores deseos de su Gobierno para el logro de un porvenir brillante en la paz y la prosperidad.

260. El representante del Irán asoció su delegación a las manifestaciones de gratitud expresadas a Su Majestad Imperial y al Gobierno y pueblo de Etiopía. Estaba muy impresionado por el progreso realizado en el año que mediaba desde su última visita; se habían construido nuevos edificios y carreteras y se habían abierto nuevas rutas aéreas, mientras que la evolución política, social y cultural había continuado con ritmo similar. Etiopía había llevado la lucha por la independencia de los pueblos subyugados a otros países, y proporcionaba los beneficios de la libertad a su propio pueblo, sobre la base del principio de justicia y prosperidad para todos. El mensaje de Su Majestad Imperial sería una fuente de gran inspiración para el Comité, como lo sería también la declaración del Secretario General de la OUA.

261. El representante de la República Unida de Tanzania expresó a Su Majestad Imperial y al Gobierno y al pueblo de Etiopía el agradecimiento de su delegación por la cordial invitación extendida al Comité Especial y por la sabia declaración inaugural.

262. La custodia y defensa de la independencia de Etiopía era una fuente de inspiración para la República Unida de Tanzania. Existían fuertes vínculos de amistad entre ambos países, originados en su deseo de adelanto para sus propios países y en sus esperanzas sobre el desarrollo del continente. Añadió que su dele-

gación estaba satisfecha de estar en el Africa Hall, la sede de la OUA, y apreciaba la declaración formulada por el Secretario General de esa organización. Confiaba en que sus esfuerzos tendrían cada día mayor éxito y le aseguró su activo apoyo a la sugestión de que se incluyera en el programa del Comité la cuestión de las Islas Comoras.

263. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas agradeció a Su Majestad Imperial, al Gobierno y a la población de Etiopía su amable invitación. Recordó que el Comité Especial se había reunido ya en Addis Abeba el año anterior y había aprobado recomendaciones muy importantes sobre las cuales se habían fundado las decisiones del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Una de las medidas más eficaces había sido el establecimiento de contactos directos con los representantes de la OUA que habían participado en las tareas del Comité Especial. Era necesario que estos contactos fueran frecuentes a fin de estrechar los vínculos entre las Naciones Unidas y la OUA para luchar mejor contra el colonialismo y aplicar la resolución 1514 (XV).

264. Dio las gracias al Sr. Diallo Telli por su importante discurso y dijo que deseaba una consolidación aún mayor de la unidad africana para combatir más eficazmente los vestigios del colonialismo.

265. El representante del Afganistán se asoció a las expresiones de agradecimiento ofrecidas por otros miembros del Comité a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía por su hospitalidad y también a Su Excelencia el Sr. Diallo Telli por su inspirado discurso.

266. El representante de Venezuela agradeció a Su Majestad Imperial Haile Selassie I, al Gobierno y al pueblo de Etiopía el que hubieran permitido una vez más que el Comité Especial tomara contacto con las realidades africanas y volviera a Addis Abeba, bastión de la libertad y de la independencia.

267. El representante de Malí agradeció a Su Majestad Imperial, al Gobierno y al pueblo etíopes su invitación y su cordial acogida. Añadió que la delegación de Malí se complacía en encontrarse en Addis Abeba, esa gran capital símbolo de la unidad africana que había suscitado tantas esperanzas. El mensaje de Su Majestad Imperial leído por Su Excelencia el Ministro etíope de Relaciones Exteriores para los miembros del Comité constituiría una fuente de inspiración para todas las delegaciones.

268. Se felicitó igualmente de haber oído la voz indignada del Sr. Diallo Telli, Secretario General Administrativo de la OUA, quien había hablado con emoción de la liberación de millones de africanos que vegetaban en la miseria y la opresión.

269. El representante de la India expresó su gratitud a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía por su generosa invitación y recordó la posición única de Etiopía y su contribución significativa a la lucha contra el colonialismo, así como los muchos vínculos e ideales compartidos con su propio país.

270. El representante de Polonia se unió a los oradores anteriores para expresar su reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su hospitalidad y cálida acogida. El mensaje que el Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía les había hecho llegar en nombre de Su Majestad Imperial Haile Selassie

² Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

orientaría y alentaría al Comité Especial en sus deliberaciones.

271. Polonia y Etiopía estaban unidas por lazos de amistad, como lo demostraba la visita oficial a Etiopía realizada en diciembre de 1965 por el Presidente del Consejo de Estado de su país. Durante esa visita, las dos naciones habían reiterado su apoyo a la lucha por la libertad de países tales como Angola, Mozambique y Guinea Portuguesa. También habían condenado toda discriminación racial y habían instado a que se aplicaran plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Rhodesia del Sur.

272. El orador expresó su reconocimiento por la alocución del Secretario General de la OUA y dijo que siempre había sido la firme convicción de su delegación que la mejor forma de conseguir los objetivos del Comité sería uniendo sus esfuerzos con los de la OUA.

273. El representante de Túnez expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su hospitalidad y por todos los esfuerzos que habían realizado para permitir que el Comité Especial llevara a feliz término su misión de descolonización. También agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores su discurso inaugural así como el mensaje que Su Majestad el Emperador Haile Selassie I había tenido a bien transmitir al Comité Especial, y que constituiría para éste una fuente de inspiración a lo largo de sus deliberaciones.

274. De la misma manera, la declaración del Secretario General Administrativo de la OUA, Sr. Diallo Telli, reflejaba las aspiraciones profundas de millones de africanos que sufrían todavía bajo el yugo colonial, y el orador apoyaba sin reservas las ideas enunciadas en esa declaración. La actitud del Gobierno de Túnez seguiría por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y se fundaría en las resoluciones pertinentes adoptadas en materia de descolonización.

275. Al igual que el Secretario General Administrativo de la OUA y otros oradores, creía que era lamentable que la cuestión de las Islas Comoras no figurase en el programa del Comité Especial, y esperaba que esa omisión no tardaría en ser remediada. Se congratuló de la estrecha colaboración que existía entre las Naciones Unidas y la OUA, organizaciones que perseguían un ideal común, o sea, la liberación de los pueblos que estaban bajo dominación colonial, y la mejora de su suerte.

276. El representante de Bulgaria a su vez agradeció a Su Majestad Imperial el Emperador Haile Selassie I y al pueblo etíope la generosa invitación que habían dirigido al Comité Especial.

277. El Gobierno búlgaro, que apoyaba sin reservas a los pueblos africanos en su lucha contra los últimos baluartes del colonialismo, atribuía gran importancia al actual período de sesiones del Comité Especial en África. El hecho de que los pueblos africanos hubieran elegido para sede de la OUA a Addis Abeba, donde las Naciones Unidas habían instalado también a varias organizaciones internacionales, demostraba bien la gratitud de estos pueblos para con Etiopía, que no cesaba de luchar por la liberación de los pueblos oprimidos de África.

278. Agradecía muy particularmente al Secretario General Administrativo de la OUA, Sr. Diallo Telli, la confianza que había depositado en el Comité Espe-

cial. Al igual que el Sr. Diallo Telli, estimaba que los candentes problemas coloniales de África exigían soluciones, no resoluciones, y también que se adoptaran medidas eficaces contra los regímenes racistas, colonialistas y minoritarios de Sudáfrica, de Portugal y de Rhodesia del Sur. Además, consideraba excelente la sugerencia del Secretario General Administrativo de la OUA de que se organizaran sesiones del Consejo de Seguridad en África, con objeto de resolver la peligrosa situación que reinaba en Rhodesia del Sur, en Sudáfrica Sudoccidental y en las colonias portuguesas, situación que amenazaba a la paz en ese continente y en el mundo entero.

279. El representante de Chile expresó su agradecimiento a Su Majestad Imperial el Emperador Haile Selassie I por haber invitado al Comité Especial a celebrar en Etiopía una parte de su período de sesiones.

280. Dijo que Chile había acogido con satisfacción la creación en 1963 de la OUA, que había logrado ya resultados muy satisfactorios. Era lamentable que esa Organización, que debiera consagrarse únicamente a mejorar el bienestar económico, social y cultural de las poblaciones africanas, tuviera que ocuparse en problemas como el del colonialismo, que no debieran existir ya en la época actual, pues la libertad era un derecho que pertenecía a todos sin distinción.

281. Añadió que había escuchado con interés la declaración del Secretario General Administrativo de la OUA, quien trazara un cuadro muy completo de la situación. Se congratulaba de la estrecha cooperación que existía entre las Naciones Unidas y la OUA, cooperación que había permitido a esta última participar en los trabajos del Comité Especial. A pesar de numerosos esfuerzos, los resultados obtenidos hasta entonces eran apenas brillantes a causa de la resistencia opuesta por ciertos Miembros de las Naciones Unidas, que no respetaban las resoluciones de la Asamblea General ni del Consejo de Seguridad.

282. El representante de la Costa de Marfil expresó su agradecimiento a Su Majestad Imperial el Emperador Haile Selassie I por el mensaje lleno de sabiduría que había dirigido al Comité Especial por conducto de su Ministro de Relaciones Exteriores. Este mensaje constituía una nueva prueba de la actuación perseverante y conciliadora que Su Majestad Imperial no había cesado en ningún momento de desarrollar, tanto en las Naciones Unidas como en la OUA, con objeto de favorecer el mantenimiento de la paz entre los pueblos. Agradeció además al Secretario General Administrativo de la OUA su declaración clara y precisa, la cual no dejaría de tener en cuenta durante los trabajos del Comité Especial.

283. El representante de Siria rindió homenaje al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su contribución a la liberación y a la unidad de África, y expresó su reconocimiento por su hospitalidad.

284. Apoyó la declaración hecha en la sesión anterior por el Secretario General Administrativo de la OUA e hizo votos por el éxito de esa Organización en su tarea de liberar a los pueblos oprimidos.

285. El representante de Yugoslavia expresó la gratitud de su delegación a Su Majestad Imperial el Emperador, al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su hospitalidad y al Sr. Diallo Telli por su importante declaración.

286. El representante de Sierra Leona expresó su satisfacción por la cálida acogida de Su Majestad Imperial el Emperador, y del Gobierno y del pueblo de Etiopía. Addis Abeba era la ciudad en que había nacido y en que tenía su sede la Organización de la Unidad Africana, y era fuente de inspiración en la lucha por la libertad y la independencia.

287. El representante de Irak recordó los lazos de amistad que desde hacía largo tiempo unían a Etiopía con el mundo árabe y dio las gracias a Su Majestad Imperial el Emperador, y al Gobierno de Etiopía por su cálida acogida y al Sr. Diallo Telli por su declaración.

288. El representante de Italia declaró que la presencia del Comité Especial en Addis Abeba por tercera vez en cinco años constituía un tributo al pueblo de Etiopía por su notable contribución a la descolonización. Dio las gracias a Su Majestad Imperial el Emperador, y al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su generosa hospitalidad.

289. La representante de los Estados Unidos de América consideraba un honor y un privilegio estar presente en Addis Abeba y recordó los lazos de amistad que desde largo tiempo existían entre su país y Etiopía.

290. El representante de Australia declaró que ante todo quería presentar a Su Majestad Imperial Haile Selassie I y a la grande y antigua tierra de Etiopía el homenaje de su delegación así como su respeto y agradecimiento por las atenciones que habían tenido para con el Comité. Era oportunísimo que el corazón revitalizado del África latiera tan firmemente desde un país que, lejos de haber seguido el camino de muchas antiguas civilizaciones, construía firmemente sobre un magnífico pasado. Un bello símbolo de ese nuevo vigor lo constituía el África Hall. Añadió que había escuchado con sumo respeto el mensaje que Su Majestad Imperial había tenido a bien enviar al Comité, y había tomado nota de las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía y del Secretario General de la OUA. La delegación de Australia se complacería en remitir todas esas comunicaciones a su Gobierno.

291. Asociándose a los que habían expresado su satisfacción por la declaración del Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana, el representante de Etiopía manifestó que su delegación compartía sin reserva la opinión expresada en cuanto a la necesidad de la rápida eliminación de los últimos vestigios del colonialismo en África, y apreciaba en alto grado los enormes esfuerzos que estaba haciendo la Organización de la Unidad Africana. Dicha Organización y el Comité Especial tenían objetivos y metas comunes y la franca declaración del secretario general de la OUA constituía una contribución importante a la labor del Comité.

292. Respondiendo a las expresiones de agradecimiento de los representantes por la acogida que se les había brindado, apuntó que, como declarara Su Majestad Imperial Haile Selassie I, no habían hecho otra cosa que regresar a su propio hogar y que era motivo de gran alegría para el Gobierno y el pueblo de Etiopía poder darles de nuevo la bienvenida. Como país que había tenido que luchar por su existencia misma contra Potencias extranjeras invasoras durante su larga y azarosa historia, Etiopía tenía gran interés en ver al colonialismo desterrado de la faz de la tierra.

293. El orador esperaba que las instalaciones puestas a disposición del Comité Especial por el Gobierno le fueran de utilidad en su trabajo.

294. Los pueblos de Mozambique, Angola, Zimbabue, África Sudoccidental y otros territorios oprimidos esperaban el día de la liberación y miraban al Comité Especial con esperanza y anhelo. El Comité podía recordar con orgullo los éxitos que había conseguido, pero mientras el colonialismo y la explotación del hombre siguieran existiendo, no era posible experimentar satisfacción total. Añadió que su delegación estaba decidida a continuar su labor con nuevo vigor durante las restantes sesiones del Comité en África.

Clausura de las reuniones

Declaración del representante del Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana

295. El representante de la Organización de la Unidad Africana indicó que transmitiría las alentadoras palabras del Presidente y de los miembros del Comité Especial al Secretario General Administrativo de su Organización, quien lamentaba que circunstancias ineludibles le hubiesen impedido asistir a la sesión de clausura. Veía complacido que el Comité deseaba reforzar los vínculos con la OUA, cuyo representante en Nueva York mantenía estrecho contacto con aquél, así como con el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica.

296. El objetivo principal de la OUA era la total supresión del colonialismo y del racismo en el Continente, como condición *sine qua non* del fortalecimiento de la unidad africana. Los africanos proseguirían la lucha sin descanso, hasta que el Continente entero quedara libre. La Historia y la experiencia demostraban que nada podía detener la marcha de la libertad; los combatientes de la libertad superarían todos los obstáculos y se granjearían el apoyo de todas las personas decentes.

297. Lamentaba que el Comité no hubiese podido debatir la cuestión de las Islas Comoras, como deseaba el Secretario General Administrativo de la OUA, mas esperaba que le fuese dable hacerlo en ulteriores reuniones. Abrigaba la esperanza de que los debates del Comité en las dos siguientes capitales africanas que visitara fueran tan fructíferos como los de Addis Abeba.

Declaraciones generales

298. El Presidente, en nombre de todos los miembros del Comité, expresó su gratitud a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía por su amable invitación al Comité Especial, por todas las facilidades que se le habían brindado y que en tan gran medida habían contribuido al éxito de su labor, por su afable y generosa hospitalidad, y por el privilegio de haber tenido otra oportunidad de estrechar el contacto y la amistad con el pueblo de Etiopía. Expresó también agrado por la colaboración de la OUA por conducto de su Secretario General Administrativo, cuya intervención había sido muy beneficiosa.

299. Podía afirmarse con toda certidumbre que habían resultado infundadas las aprensiones de uno o dos miembros sobre la conveniencia de celebrar en África las reuniones del Comité Especial. Si hicieran falta pruebas, bastaría examinar los resultados hasta entonces conseguidos por el Comité, y las resoluciones aprobadas; esa misma mañana, por ejemplo, había aproba-

do una resolución muy importante y constructiva sobre el África Sudoccidental, en la que se recomendó, entre otras cosas, que el Consejo de Seguridad hiciera obligatoria para todos los Estados la aplicación de las medidas que figuran en la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General. Al proceder así, desempeñó una de las tareas que le había señalado concretamente la Asamblea General en el párrafo 5 de la resolución 2105 (XX), en el que se pidió al Comité Especial que informara al Consejo de Seguridad de todos los hechos nuevos ocurridos en cualquiera de los territorios que examinara y que pudieran constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que hiciera sugerencias que el Consejo pudiera atender al estudiar las medidas que convenía adoptar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

300. El Comité había aprobado también esa misma mañana una resolución referente a Basutolandia, Bechuanalandia y Swazilandia (véase cap. VII, párrafo 237), encaminada primero a garantizar que los progresos de los Territorios hacia la independencia se basaran en la libre expresión de sus pueblos, de conformidad con la resolución 1514 (XV); segundo, a asegurar la integridad territorial y la soberanía; y tercero, a mejorar su situación económica. Esas resoluciones, junto con los debates celebrados respecto de Rhodesia del Sur, Adén, Ifni y el Sáhara Español, justificaban bien la visita del Comité a África. El orador confiaba en que las reuniones de El Cairo y Argel tendrían unos resultados tan valiosos y fructíferos como los mencionados.

301. Los miembros partirían de Addis Abeba guardando felicísimo recuerdo de su estancia, fortalecidos e inspirados por la labor que se hacía en el desarrollo de la gran urbe y por la que realizaba la OUA.

302. El representante del Secretario General, en nombre de todos los miembros de la Secretaría, agradeció sinceramente a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía todas las facilidades ofrecidas y la generosa hospitalidad dispensada. Agradeció especialmente al Sr. Mekasha, y a su colega el Sr. Deressa, su ayuda y su amabilidad personal, así como la cooperación demostrada por los funcionarios de la OUA y la Comisión Económica para África.

303. El representante de Etiopía declaró que su Gobierno agradecía al Comité Especial el haber aceptado su invitación, y creía firmemente que su visita había favorecido mucho a la causa por la que fuera creado. Las resoluciones aprobadas por el Comité habían dado indudable ánimo a las muchas personas que en todo el mundo seguían luchando por obtener la libertad y la independencia, y los peticionarios no dudaban en absoluto hacia dónde se inclinaban las simpatías del Comité. Los resultados habían sido, pues, apreciables.

304. El colonialismo era un azote que continuaba mortificando a la humanidad, y Etiopía deploraba la situación que había provocado la urgente creación del Comité. Triste comentario a la civilización era el hecho de que todavía en la segunda mitad del siglo XX — época que había presenciado muchos logros humanos de índole práctica — gran parte de la familia humana padeciera privaciones e ignominia. Por ello, el Gobierno de Etiopía aguardaba con impaciencia el día en que no fuese necesaria la existencia del Comité, cuando las naciones disfrutaran por igual de los frutos de la libertad, y la explotación del hombre por el hombre se perdiera en el olvido. El hecho de que el avance hacia este objetivo fuese quizá lento y espinoso debería ser un acicate para que el Comité desplegara esfuerzos aún mayores.

305. Esperaba que los miembros hubiesen disfrutado de su estancia en Addis Abeba, y les deseaba éxito en los trabajos de El Cairo y Argel. Añadió que su delegación tendría el grato deber de transmitir sus expresiones de agradecimiento a Su Majestad Imperial y al Gobierno de Etiopía.

D. REUNIONES CELEBRADAS EN EL CAIRO, REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Apertura de las reuniones

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida

306. El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida manifestó que el Presidente Gamal Abdel Nasser le había pedido que transmitiera sus saludos al Comité Especial y le diera la bienvenida a la República Árabe Unida. El Presidente deseaba asimismo expresar sus mejores votos por la realización de los nobles esfuerzos del Comité para llevar a la práctica la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y a poner fin al colonialismo en el mundo. El Presidente estaba convencido de que los miembros continuarían su gran misión con la perseverancia y determinación que habían mostrado siempre. Entre tanto, les deseaba una feliz estancia entre el pueblo de la República Árabe Unida.

307. El Ministro de Relaciones Exteriores consideraba un privilegio dar la bienvenida al Comité en nombre del Gobierno y pueblo de la República Árabe Unida. Añadió que su país agradecía la decisión de reunirse en El Cairo, y elogió la nueva y constructiva práctica, adoptada por el Comité, de celebrar sesiones cerca de los territorios que todavía se hallaban bajo el colonialismo en África y en la Península Arábiga.

308. El poner fin a todas las formas del colonialismo era esencial para el mantenimiento de la paz internacional. Por lo tanto, la República Árabe Unida estimaba en alto grado las nobles e importantísimas tareas del Comité, que habían contribuido a elevar la moral de los pueblos sometidos al colonialismo y que les habían dado nuevas esperanzas de libertad pese a los continuos actos de opresión. Esos esfuerzos habían unido también a los pueblos oprimidos en su lucha para lograr el derecho a la libre determinación, para desarrollar sus sistemas políticos y explotar los recursos económicos a fin de alcanzar un nivel digno de prosperidad para el individuo en completa libertad y sin discriminación.

309. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales representaba un hito en la historia de la Organización y era un paso muy constructivo. Además, los esfuerzos del Comité habían contribuido apreciablemente a formar una tendencia de la opinión pública mundial hostil al colonialismo. Esa tendencia había robustecido la voluntad de luchar y había aguzado la conciencia de los pueblos que intentaban recobrar su libertad. El Ministro de Relaciones Exteriores aseguró al Comité que el Gobierno y el pueblo de la República Árabe Unida estaban decididos a seguir apoyando a los pueblos que luchaban contra todas las formas del colonialismo.

310. Añadió que su país había seguido con gran interés y aprobación las deliberaciones del Comité en Dar es Salaam, Mogadiscio y Addis Abeba, y no dudaba que los pueblos africanos alcanzarían sus nobles y legítimos propósitos en Rhodesia del Sur, Angola, Mo-

zambique y otros territorios africanos sometidos todavía al yugo colonial. La República Árabe Unida estaba igualmente convencida de que las fuerzas del colonialismo y el racismo se rendirían pronto ante el gran esfuerzo de los africanos y los valores que éste representaba. Entre tanto las Potencias coloniales tendrían que reconocer la fuerza de la lucha nacional de África, así como el valor, las realizaciones y el papel del hombre africano. Dichas fuerzas tendrían asimismo que hacer frente a las decisiones de la Organización de la Unidad Africana, que representaba no sólo una estructura sino también un instrumento de los Estados independientes de África para lograr los honorables objetivos de la libertad y la construcción en todo el continente africano.

311. El pueblo de la República Árabe Unida concedía gran importancia a las cuestiones de Adén y Omán, que el Comité habría de examinar. La cuestión de Adén y los Protectorados de Adén había pasado ya la etapa de las meras resoluciones. Actualmente se trataba más bien de tomar las medidas necesarias para dar aplicación a las resoluciones de las Naciones Unidas y del Comité Especial; el Gobierno del Reino Unido tenía la obligación de acatar y cumplir sin reservas esas resoluciones, así como de iniciar una política de cooperación con el Comité Especial.

312. Se declaró convencido de que el Comité tenía plena conciencia de la agresión y la intervención armada de las cuales el pueblo de Omán había sido víctima. Ya la Asamblea General, en su vigésimo período de sesiones, había tomado una medida positiva al reconocer el legítimo derecho del pueblo de Omán a la libre determinación y a pedir la evacuación de las fuerzas extranjeras de su territorio. También estaba convencido de que el Comité, en el cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas para examinar la causa de la lucha del pueblo de Omán, tomaría las decisiones y medidas necesarias para poner fin a la agresión armada contra ese pueblo, el cual podría así recuperar su verdadera soberanía y gozar de su derecho inalienable al desarrollo y al progreso.

313. El pueblo de la República Árabe Unida, junto con todos los pueblos árabes y africanos, observaría la labor del Comité Especial con gran esperanza e ilusión. Sus reuniones en El Cairo y en otras capitales africanas se verían indudablemente coronadas por el éxito cristalizando así su noble e importantísima tarea de poner fin al colonialismo.

Declaración del Secretario General Interino de la Liga de los Estados Árabes

314. El Secretario General Interino de la Liga de los Estados Árabes dio en nombre de ésta la bienvenida al Comité Especial en la sede de esa entidad y agradeció la invitación que se le había hecho para que asistiera como observador a las reuniones de ese Comité que reflejaba los nobles objetivos de las Naciones Unidas, o sea, liquidar el imperialismo y liberar a la humanidad de las ambiciones y los peligros del imperialismo.

315. Ese mismo objetivo era también la piedra angular sobre la que se había fundado la Liga de los Estados Árabes y por cuya realización había trabajado durante sus veintiún años de existencia. Si la reunificación se consideraba como el objetivo final de la nación árabe, la libertad podía considerarse como el cimiento de la unidad y el núcleo de la misma. Por eso la Liga de los Estados Árabes y sus miembros habían lu-

chado por la causa de la liberación de la nación árabe. En su momento se había logrado la victoria por la libertad de Libia, de Túnez, de Marruecos, de Sudán, de Kuwait y de Argelia, países que se habían convertido en Miembros de la Liga de los Estados Árabes y de las Naciones Unidas con plenos derechos.

316. La Liga y sus miembros estaban luchando actualmente con gran fe y decidido propósito contra el imperialismo británico en la península arábiga. El imperialismo británico había impuesto un gobierno tiránico en el Sur Ocupado, en Omán, en Mascate y en los emiratos del Golfo, desconociendo en forma flagrante a las Naciones Unidas y violando su Carta y sus principios, así como las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial.

317. El imperialismo seguía aferrándose a medidas anticuadas que eran restos de los dos siglos pasados y acudía a la represión, a la intimidación y al aniquilamiento. De ese modo, el imperialismo hacía caso omiso de los sufrimientos, las pérdidas y los sacrificios de la población y pasaba por alto el hecho de que esa parte de la nación árabe encarnaba una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Ni la nación árabe ni las otras naciones libres del mundo aceptarían en modo alguno la presencia del imperialismo, que imponía su indignante explotación y ataba a los pueblos a su yugo, causando así una gran ignorancia y pobreza en la región. El imperialismo constituía asimismo una amenaza para la seguridad de la región y la paz del mundo. Debía tenerse presente que en la época actual se había liquidado el imperialismo en todos los países de Asia y sólo persistía en la región árabe. Ya era hora de que el imperialismo se retirase de otros Estados africanos. Disfrazado bajo formas nuevas, el imperialismo trataba desesperadamente de recuperar su antiguo poder, pero sus tentativas estaban condenadas al fracaso pues afectaban en lo más hondo a la evolución de la vida y a la madurez de la conciencia humana.

318. A este respecto podía ser oportuno recordar lo ocurrido en los países árabes hacía 140 años, cuando el imperialismo británico había pasado a ser sinónimo del atraso de la población árabe, o recordar la prolongada lucha nacionalista durante ese periodo sombrío, que había llegado a una etapa decisiva al iniciarse el Frente de Liberación, su guerra sagrada contra la agresión imperialista y las históricas hazañas de heroísmo logradas por el Frente en los últimos cuatro años, o las maquinaciones imperialistas para sofocar esos movimientos. El ejemplo más destacado de estas maquinaciones había ocurrido en 1959, cuando el Reino Unido se embarcó en la fundación de la llamada "Federación de la Arabia Meridional", títere suyo y medio por el que ejercía sus poderes imperialistas en el Sur Ocupado. Otro ejemplo habían sido las conferencias subversivas del Reino Unido, a las que falsamente llamaba constituyentes. La próxima conferencia de esta índole había de efectuarse en agosto de 1966 entre el Reino Unido por una parte y su títere en la región por otra. En realidad, sería una conferencia del Reino Unido consigo mismo.

319. Debían señalarse también actos de intimidación y de tiranía en Mascate, Omán y el Golfo, actos que se habían puesto en evidencia y habían recibido publicidad gracias al Comité Especial, que había sostenido y continuaría sosteniendo la libertad durante el presente debate de las dos cuestiones.

320. Sin embargo, el orador deseaba subrayar que el peligro imperialista británico en la Península Arábiga

tenía una sola naturaleza, aunque adoptaba diferentes formas. Amenazaba no sólo a la península arábiga, sino también al mundo afroasiático en su totalidad. El imperialismo no podría ser nunca erradicado si no se desmantelaban sus bases en la región árabe.

321. Añadió que hacía apenas una semana había leído el vigésimo sexto folleto de la serie Adelphi Papers, titulado *Sources of Conflict in the Middle East* (Fuentes de controversia en el Oriente Medio). Nada había más significativo y elocuente que este documento para revelar el objetivo básico del imperialismo del Reino Unido en la península arábiga y centrar la atención sobre las bases desde las que se dirigía la agresión contra el pueblo.

322. El mencionado documento no necesitaba comentarios; bastaría con citar algunos párrafos del mismo. Por ejemplo:

“Gran Bretaña tiene bases terrestres, marítimas y aéreas en Adén y Bahrein, unidas por una cadena de cuatro puertos aéreos de tránsito y complementadas por pistas de aterrizaje más pequeñas en la Federación de la Arabia Meridional y en los protectorados de Adén oriental. Las bases dan apoyo a fuerzas mixtas de infantería de tierra, blindadas y de artillería, a una pequeña fuerza naval de escolta, dragaminas y naves de desembarco, y a una fuerza aérea que incluye aviones de caza y de ataque, aviones de reconocimiento ofensivo, aviones de transporte y algunos helicópteros. Gran Bretaña está oficialmente obligada a defender la Federación de la Arabia Meridional (incluso Adén), así como los protectorados que quedan fuera de la Federación. En la zona del Golfo Pérsico, Gran Bretaña está también formalmente obligada a defender Bahrein contra ataques desde el Golfo, Qatar contra ataques desde el mar y Fujairah contra cualquier agresión... Además de estos compromisos oficiales, Gran Bretaña se considera — y los demás la consideran, en general — obligada por un compromiso moral a defender a todos aquellos Estados del Golfo de cuyas relaciones internacionales sigue siendo responsable el Gobierno británico. La Gran Bretaña se comunica con las bases en la región y las refuerza, principalmente por mar a través del Canal de Suez, o por aire sobre Turquía y el Irán, hasta Bahrein. Ambas rutas también son importantes para apoyar la presencia militar británica en la zona del Océano Indico y en Asia Sudoriental.”³

323. El documento contenía informaciones que indicaban un acercamiento de puntos de vista entre los Estados Unidos y el Reino Unido sobre este plan militar imperialista. Se hacía referencia asimismo al cinturón estratégico occidental, que tendía a contener a la Unión Soviética y a los países partes en el Pacto de Varsovia, constituyendo así una fuerza ofensiva-defensiva para hacer frente a la expansión soviética. El documento continuaba diciendo:

“Las bases y los compromisos británicos en Arabia Meridional y el Golfo Pérsico [han contribuido a promover la influencia occidental en el Oriente Medio y a desalentar la beligerancia local] ... ayudan a mantener abierta una ruta estratégica hacia las posiciones británicas en el Océano Indico y en el Asia Sudoriental, y puede decirse por lo tanto que contribuyen a contener cualquier avance de una Poten-

cia comunista hacia dichas zonas. Sin embargo, su propósito primordial es de carácter más local: proteger el flujo de petróleo del Oriente Medio, impedir o contener los conflictos en las zonas inmediatas y servir de base para la intervención militar británica en otras zonas vecinas.”⁴

324. El documento mencionaba también el peligro que constituía el nacionalismo árabe y su poderío y revelaba planes imperialistas contra los países árabes que estaban surgiendo en la región. El imperialismo temía a esa fuerza, que constituía una amenaza a sus aspiraciones agresivas.

325. El documento continuaba diciendo, en un estilo que recordaba el de la fosilizada mentalidad imperialista, que la declaración Curzon de 1903, donde se estipulaba que “La paz de estas aguas debe mantenerse... y la influencia del Gobierno británico debe seguir siendo suprema”, seguía teniendo validez en 1966 en lo que se refería al Sur Ocupado y al Golfo, haciendo así caso omiso de los acontecimientos del siglo XX.

326. El orador pidió indulgencia por sus extensas citas, pues las consideraba prueba inequívoca de las últimas maquinaciones británicas contra el movimiento de liberación del Sur Ocupado, así como de la rígida actitud británica en los emiratos de Mascate, de Omán y del Golfo. Esas declaraciones, demostraban los efectos a largo alcance de la batalla y revelaban la verdad que buscaba el Comité.

327. El orador deseaba revelar asimismo tres importantes aspectos paralelos de la misma política imperialista en la Arabia Meridional, e indicar la posición adoptada por la Liga de los Estados Arabes en esas cuestiones.

328. En la causa del Sur Ocupado, la Liga de los Estados Arabes había recurrido, durante sus primeros diecisiete años de existencia, a todos los medios diplomáticos a su alcance para tratar con el imperialismo británico, pero sus tentativas habían sido vanas. El resultado había sido más agresión y represión de parte del imperialismo. En 1962 el movimiento de liberación del Sur Ocupado había iniciado una nueva etapa de acción, mediante una lucha nacionalista eficaz y a la vez por conducto de las Naciones Unidas. Durante los últimos cuatro años, los países árabes, a través de sus órganos — los Consejos de la Liga, los Jefes de Gobierno y las reuniones de Jefes de Gobierno —, habían aplicado las medidas indicadas a continuación:

En primer lugar, habían realizado esfuerzos contra el imperialismo británico en la península arábiga por todos los medios a su disposición a fin de erradicar ese imperialismo y de consolidar el movimiento de liberación en el Sur Ocupado y en Omán. También habían prestado activa asistencia en el Golfo, con objeto de ayudarlo a lograr la liberación y el progreso.

Asimismo habían aplicado las resoluciones del Comité Especial y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular las resoluciones aprobadas por la Asamblea General el 5 de noviembre de 1965, sobre el Sur Ocupado, y del 17 de diciembre de 1965, sobre Omán.

Habían adoptado, además, una firme posición contra las conferencias y las maniobras imperialistas británicas que, a fin de asegurar la continuación de su presencia imperialista bajo una forma nueva, trataban de esta-

³ The Institute for Strategic Studies, *Sources of Conflict in the Middle East*, Adelphi Paper No. 26, marzo de 1966, págs. 26 y 27.

⁴ *Ibid.*, págs. 27 y 28.

blecer regímenes títeres que no eran producto de la libre voluntad de los pueblos de la región. Estas tentativas y maniobras habían sido condenadas por las Naciones Unidas.

Habían aunado también los esfuerzos de los nacionalistas en una organización a fin de cerrar filas contra los imperialistas, que trataban de sembrar la semilla de la discordia.

329. El Nationalist Liberation Movement había adquirido mayor impulso últimamente. El 3 de marzo de 1966, el Nationalist Front y la Liberation Organization se fundieron en un órgano único, el Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY). El acuerdo había sido ratificado el mismo día por la Yemen Occupied South Commission de la Liga Árabe y por el Consejo de la Liga durante el mismo mes.

330. La Liga de los Estados Árabes creía firmemente que el Comité condenaría la tentativa actual del Reino Unido de celebrar negociaciones con el Gobierno de la Federación, que era instrumento suyo. El Reino Unido intentaba complicar a las Naciones Unidas en sus tentativas de agresión y estaba tomando medidas para celebrar en agosto próximo una conferencia que sería una copia de las conferencias anteriores, todas ellas condenadas al fracaso. Además, se negaba a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. En consecuencia, era necesario que se viera ante una confrontación decisiva. La lucha nacionalista dentro del Territorio adquiriría cada día mayores proporciones y se hacía feroz.

331. Sin embargo, el Reino Unido persistía en sus negociaciones y preparativos, y era inexorable en su insistencia en más sacrificios y derramamiento de sangre. Ello era una prueba indiscutible de que las negociaciones actuales iniciadas por el Reino Unido distaban mucho de responder a las aspiraciones de la población de la zona, cuya fe en la libertad era cada día más firme, y que estaba más decidida que nunca a lograr la victoria.

332. En cuanto a la cuestión de Omán, el 17 de diciembre de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas había reconocido el derecho natural del pueblo de Omán a liberarse de los imperialistas británicos, así como a la libre determinación y a la independencia; además, había censurado al Reino Unido por negarse a colaborar con el Comité Especial de Omán, y había pedido el retiro de las tropas británicas de Omán, y la abolición de la supremacía británica en todos sus aspectos, sin restricciones a las libertades y los derechos de la población.

333. Sin embargo, desde 1955 las fuerzas de ocupación del Reino Unido persistían en defender su presencia y continuaban desafiando las resoluciones de las Naciones Unidas e infringiendo los derechos naturales de la población árabe de Omán. La Liga de los Estados Árabes confía en que el Comité Especial proclamaría el derecho del pueblo de Omán a la libertad y la independencia de una manera nueva y efectiva.

334. Los emiratos del Golfo estaban también encadenados por el imperialismo británico, que les impedía el progreso y la prosperidad. Además, el imperialismo imponía una tutela interna y externa que carecía de toda base en el derecho internacional. En realidad, esta era la forma más odiosa del imperialismo, cuya liquidación era el objetivo primordial del Comité Especial.

335. En cumplimiento del Pacto de la Liga, que pedía la "cooperación con los países árabes no miembros del Consejo de la Liga, en la empresa de lograr la prosperidad y asegurar su porvenir", el 31 de marzo de 1964 el Consejo de la Liga había aprobado una resolución en la que decidió enviar una misión encabezada por el Secretario General de la Liga y cuyos miembros eran representantes personales de los Jefes de los Estados árabes vecinos inmediatos de los emiratos del Golfo. La misión tenía por objeto llegar con los emires a un acuerdo sobre los métodos de lograr una cooperación fraterna con esa región, y ofrecer asistencia económica y técnica.

336. La Misión había partido en octubre de 1964, seguida de una misión de técnicos. Se habían concluido acuerdos con los gobernantes de los emiratos para proyectos de pavimentación de carreteras, agricultura, abastecimiento de agua, electricidad y servicios de higiene, que había de financiar y ejecutar la Liga. Esta destinó los fondos necesarios, y transfirió el saldo a los bancos Dobai antes de iniciar los trabajos.

337. Desde 1964 el Reino Unido se había mostrado indiferente hacia los proyectos de la Liga que pretendían dar nueva vida a la región, pero al comprender la eficacia de la asistencia árabe y la disposición de los jefes de la población a aceptarla, se había embarcado en una política de presiones y de conspiración. Entonces se decidió que el Secretario General de la Liga visitase los emiratos a fin de obtener de sus gobernantes la ratificación de los proyectos árabes. Pocas horas antes de su llegada, el 10 de mayo de 1965, el Secretario General recibió los documentos necesarios. Los gobernantes, en especial los de Sharjak y Ras El Khaima, dado su prestigio, fueron objeto de intimidación y se los amenazó con deponerlos si no retiraban su acuerdo de cooperación con la Liga. Todos ellos se negaron a someterse a tales amenazas.

338. El 22 de junio de 1965, una misión de expertos árabes se dirigió a Dulai a fin de empezar los trabajos. Fue entonces cuando el imperialismo británico reveló sus métodos odiosos y anticuados. Cuando los expertos llegaron a Doha, capital del Emirato de Qatar, el 24 de junio de 1965, se les impidió por la fuerza continuar su viaje y se vieron obligados a regresar a Kuwait el mismo día. A ello siguió la detención del Jeque Sakr Ibn Sultan, gobernante del Emirato de Sharjak, y su destierro a Kuwait. El Secretario General de la Liga recibió cables idénticos firmados por los otros gobernantes, los cuales comunicaban la denuncia de los acuerdos precedentes. Este incidente demostró, pues, uno de los odiosos métodos del despotismo imperialista.

339. Declaró que esas breves referencias al imperialismo británico en el Sur Ocupado, en el Imanato de Omán y en los emiratos del Golfo demostraban claramente los planes imperialistas, que amenazaban la seguridad de toda la región y ponían en evidencia la falsedad de las recientes declaraciones del Reino Unido.

340. Por entonces, el Reino Unido se había declarado dispuesto a llevar a cabo proyectos de construcción en la zona, pero un año más tarde seguía sin prestar atención a dichos proyectos. Sin embargo, en su prolongada lucha por la libertad, los árabes habían aprendido a no hacer caso de las promesas de los imperialistas, pues eran meras falsedades. Lógicamente, el imperialismo jamás permitiría que el progreso, su enemigo mortal, sustituyese al atraso, su aliado complaciente.

341. El Gobierno del Reino Unido había anunciado su decisión de evacuar el Sur Ocupado hacia 1968, pero simultáneamente había emprendido negociaciones, basadas en un sistema no constitucional condenado por las Naciones Unidas y pasando por alto a los verdaderos representantes del pueblo. Recientemente había concluido un nuevo acuerdo secreto con el gobernante de Bahrein. Dicho acuerdo tenía por objeto ampliar la base militar de Bahrein y equiparla con grandes cantidades de armas ofensivas. Además, se había informado que el Departamento de Relaciones Exteriores del Reino Unido había hecho todo lo posible porque ese acuerdo tuviera carácter confidencial, pues temía la presión que los nacionalistas árabes podían ejercer sobre el Gobierno de Bahrein para que anulara su cooperación con el Reino Unido.

342. Esta situación era causa de grave inquietud, entre otras razones porque el Reino Unido persistía en sus anticuados planes imperialistas y hacía caso omiso de que el mundo está en la segunda mitad del siglo XX. Otra razón era que los revolucionarios del Sur Ocupado continuaban la heroica lucha por la liberación de su país y que la población de Omán estaba iniciando hostilidades. La resistencia nacionalista se había preparado desde el Imanato de Omán hasta las zonas interiores de Mascate. La situación en aquel momento indicaba que era inminente una explosión sobre todo después del derrocamiento del Emir de Sharjak, y dada la persistencia del Reino Unido en oponerse al apoyo que la Liga prestaba a los proyectos de rehabilitación.

343. Las actividades de intimidación en la zona habían aumentado y se había concluido un acuerdo sobre la base militar agresiva de Bahrein.

344. La nación árabe y los pueblos libres de todo el mundo dirigían su mirada hacia las históricas reuniones del Comité en El Cairo, ciudad que había logrado memorables victorias contra las fuerzas agresivas del colonialismo y del neocolonialismo, pues era el baluarte de la lucha por la libertad. Todos recordaban con gratitud sus enormes esfuerzos para atender a los que luchaban por la libertad en sus respectivas patrias. El mundo recordaría siempre la encomiable posición adoptada por el Comité en la causa de la justicia y la libertad, y esperaba firmemente que adoptaría una posición decisiva en apoyo de la causa de liberación árabe.

Declaraciones generales

345. El Presidente, hablando en nombre del Comité Especial, dio las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida por su inspirado discurso y por el emocionante y admirable mensaje del Presidente Gamal Abdel Nasser, que había transmitido. El Ministro de Relaciones Exteriores había presentado elementos importantes que ayudarían al Comité en sus tareas de El Cairo.

346. El Comité agradecía al Gobierno de la República Árabe Unida su invitación a celebrar algunas de sus sesiones en El Cairo, así como su hospitalidad y excelentes servicios.

347. La posición de vanguardia del Gobierno de la República Árabe Unida en la lucha por la liberación de los pueblos coloniales, su devoción a la causa de la paz, su dedicación a los propósitos consignados en la Carta de las Naciones Unidas y su aportación constructiva a las labores del Comité, eran una inspiración

y un estímulo desde el comienzo a la tarea del Comité en El Cairo.

348. También agradeció al observador de la Liga de los Estados Árabes su declaración. La relación especial de la Liga con las Naciones Unidas y su contribución a los objetivos y aspiraciones del Comité Especial le conferían particular importancia, por lo que se prestaría la atención debida a los puntos que habían planteado durante las deliberaciones del Comité en El Cairo.

349. Era apropiado que el Comité se ocupara en los asuntos de Adén y Omán durante su permanencia en El Cairo. Los acontecimientos de Adén habían llegado a una etapa crucial. Reconociendo plenamente la importancia que los pueblos árabes concedían al problema, el Presidente aseguró que el Comité no escatimaría esfuerzo alguno para hacer la contribución que de él esperaban esos pueblos, así como todos los pueblos amantes de la libertad del mundo entero. Como representante de un país que había sufrido bajo la dominación colonial, el Presidente prometió que el Comité procedería con determinación inquebrantable para asegurar la plena y pronta aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Comité Especial. A este respecto, extendió su calurosa bienvenida al Representante Especial del Secretario General en Adén, Sr. Omar A. H. Adeel, quien estaba presente y participaría en el debate cuando se examinara la cuestión de Adén.

350. En cuanto a la cuestión de Omán, el Comité, con igual determinación, se esforzaría por hacer una contribución eficaz para asegurar al pueblo de Omán el ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con sus deseos libremente expresados. En su tarea el Comité se había de guiar, naturalmente, por la resolución 2023 (XX) del 17 de diciembre de 1965 de la Asamblea General.

351. Para terminar, el Presidente dio de nuevo las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores por su discurso y, por conducto de él, al Gobierno de la República Árabe Unida, que había hecho posible la reunión del Comité en El Cairo. Deseaba asimismo pedir al Ministro de Relaciones Exteriores que reiterase su gratitud al Presidente Gamal Abdel Nasser por el inspirado mensaje enviado en esa ocasión al Comité.

352. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dio las gracias al Gobierno de la República Árabe Unida por haber invitado al Comité Especial a celebrar parte de sus sesiones en la capital del nuevo Estado árabe, que estaba a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo y de la defensa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos oprimidos de África, Asia, América Latina y el resto del mundo. En nombre de su delegación, expresó su profunda gratitud a Su Excelencia, el Sr. Gamal Abdel Nasser, Presidente de la República Árabe Unida, así como a su Gobierno y su pueblo, que estaban ligados por estrechos lazos de amistad al pueblo soviético. Las relaciones entre los dos países y los dos pueblos estaban fundadas en una lucha común en pro de la paz, el progreso social y el socialismo. El Gobierno de la República Árabe Unida había ofrecido al Comité Especial la posibilidad de examinar sobre el terreno los problemas fundamentales de los pueblos de Arabia en su lucha contra los regímenes coloniales, de oír a los representantes de las organizaciones nacionalistas y patrióticas de Adén y de Omán y

de todos aquellos que combatían por la liberación de esos territorios, y de preparar en común soluciones que permitieran aplicar lo más rápidamente posible las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y otras muchas decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Adén y de Omán.

353. Más de cinco años habían transcurrido desde que se aprobara esa Declaración y sin embargo millones de hombres, habitantes en su mayor parte de África y la Arabia del este, seguían sufriendo bajo el dominio colonial, seguían encadenados, sometidos a una explotación brutal, a toda clase de humillaciones, privados de su dignidad humana, perseguidos y asesinados únicamente porque se negaban a seguir siendo esclavos. La conciencia de la humanidad no podía quedar insensible ante los crímenes de los colonialistas. Era preciso buscar los medios de hacer desaparecer las huellas del colonialismo y sus secuelas, el apartheid y el racismo. El colonialismo, aunque herido mortalmente, no quería morir. Se defendía furiosamente. Desde hacía algún tiempo, en algunas regiones del mundo las fuerzas colonialistas e imperialistas intentaban contraatacar a los movimientos de liberación nacional y minar la soberanía de algunos Estados jóvenes recién independizados.

354. Algunos círculos dirigentes de los Estados Unidos intervenían en los asuntos internos de otros Estados y llevaban a cabo una guerra de agresión contra el pueblo del Viet-Nam. Los colonialistas británicos lanzaban expediciones de castigo contra los pueblos de Arabia Meridional, de Adén y de Omán. Sus secuaces portugueses enviaban constantemente nuevas tropas a Angola, Mozambique y a la Guinea llamada portuguesa para exterminar a los patriotas de esos territorios. El régimen de Verwoerd no ocultaba su intención de anexionarse el África Sudoccidental. La declaración unilateral de independencia de Ian Smith constituía un desafío dirigido no sólo contra 4 millones de habitantes del Zimbabwe sino contra toda África ansiosa de libertad.

355. Los proyectos criminales de Ian Smith, de Verwoerd y de Salazar que tenían por objeto mantener en pie los regímenes racistas y colonialistas, no tendrían posibilidad alguna de éxito si sus autores no tuvieran la seguridad de contar con el apoyo militar, económico y político de varios Estados miembros de la OTAN, entre los que cabía citar en primer lugar a los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania. La situación internacional exigía imperativamente que todas las fuerzas en lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo se unieran. La Arabia Meridional era uno de los últimos bastiones del imperialismo británico e internacional. Ese Territorio se había convertido en una base de máxima importancia, que amenazaba la paz y la seguridad de los pueblos de la Arabia del este.

356. Los monopolios imperialistas, y sobre todo los norteamericanos y británicos, se habían apoderado de la principal riqueza de Arabia Meridional, el petróleo. Los intereses de los monopolios petroleros estaban estrechamente protegidos por fuerzas terrestres, navales y aéreas, que amenazaban no sólo la seguridad de los pueblos de la región sino también la de todo el mundo árabe. Durante la crisis de Suez, las bases de Adén y de Bahrein habían sido el punto de partida de los ataques aéreos contra Egipto. Hoy, con sus provocaciones militares, esas mismas bases amenazaban a los jóvenes Estados árabes y eran utilizadas para luchar contra

los movimientos de liberación nacional en Arabia Meridional y para castigar implacablemente a los pueblos árabes que, con las armas en la mano, combatían por su libertad. Aviones británicos despegaban de ellas para bombardear las aldeas de Arabia Meridional. Los soldados británicos lanzaban verdaderas expediciones coloniales contra los patriotas de esta región y perseguían a los que combatían por la libertad de Adén. Las fuerzas militares británicas seguían disponiendo de una red de bases militares en el Cercano Oriente y el Oriente Medio. El Reino Unido mantenía en la región de Adén y del Golfo contingentes importantes de tropas, que utilizaba tanto para eliminar los movimientos de liberación nacional de Arabia Meridional como para ejercer presión en los Estados independientes de Arabia oriental.

357. Refiriéndose a la gran importancia que el imperialismo atribuía a la conservación de bases militares en esa región del mundo, el Sr. Julian Amery, antiguo Ministro del Aire del último Gobierno conservador británico, había escrito hacía poco: "Los hechos demuestran irrefutablemente que la presencia militar del Reino Unido al este de Suez ha facilitado considerablemente, y sigue facilitando, la protección de nuestros intereses contra las fuerzas locales que le son hostiles." Se trataba de una declaración sin disimulo; "las fuerzas locales hostiles" no eran sino los pueblos de Asia y de África y los pueblos de Arabia Meridional que resistían a la dominación británica y se oponían a toda injerencia en sus asuntos internos. La política "al este de Suez" se presentaba como una tentativa constante de protección de los intereses imperialistas, era contraria a los intereses de los pueblos de Asia y de África y tenía por objeto reforzar la dominación colonial del imperialismo británico en el sur de la península arábiga.

358. Los métodos monstruosos y bárbaros utilizados por el imperialismo y el colonialismo para ahogar las legítimas aspiraciones de los pueblos a la libertad y a la independencia estaban, sin embargo, destinados al fracaso. A pesar de los fracasos locales y de las derrotas temporales, los efectivos de las fuerzas de liberación no dejaban de aumentar y su material mejoraba constantemente. Los últimos vestigios del colonialismo no resistirían al asalto de estas fuerzas; esa certidumbre se basaba en que todos los Estados y todos los pueblos amantes de la libertad, de la paz y del progreso apoyaban de manera cada día más activa a los combatientes en pro de la libertad.

359. La posición de la Unión Soviética en la materia era bien conocida: para contribuir a una liquidación lo más rápida posible de los regímenes coloniales, había prestado y seguiría prestando ayuda y asistencia a los pueblos que sostenían una lucha heroica contra la opresión colonial.

360. Durante su reciente visita a la República Árabe Unida, el Sr. Kosyguin, Presidente del Consejo de Ministros de la URSS, había declarado: "Nuestro Estado y el pueblo soviético entero apoyan sin reservas a todos los que combaten por la libertad y la independencia. Desde hace muchos años la Unión Soviética sigue una política de apoyo activo a los pueblos que luchan por la independencia nacional, por la liquidación definitiva del capitalismo y por la consolidación de la paz. Pueden tener la seguridad de que seguiremos fieles a esta política."

361. En el comunicado conjunto sobre las conversaciones de los dirigentes de la Unión Soviética y de la

República Árabe Unida, en el que se exponía la posición de los cosignatarios relativa a los problemas coloniales, se condenaba la política de opresión de la Potencia colonial en Adén y en la Arabia Meridional. Los cosignatarios afirmaban que estaban dispuestos a apoyar sin reserva la lucha heroica de los pueblos árabes por su libertad y por una libre determinación auténtica. Hacían un llamamiento al Gobierno del Reino Unido invitándole a que aplicase las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aseguraban al pueblo de Omán que contaba con su apoyo en la lucha contra el colonialismo.

362. La delegación de la Unión Soviética estaba convencida de que, en el curso de sus reuniones en El Cairo, el Comité Especial tomaría decisiones que contribuirían a sostener a las fuerzas de liberación de la Arabia Meridional y a facilitar la liquidación más rápida posible de los regímenes coloniales en esa parte del mundo. La Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Árabes deberían desempeñar un papel importante en la liquidación de estos regímenes en África y en Arabia oriental. En el curso de los años precedentes, las Naciones Unidas por una parte, la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Árabes por otra, habían conseguido coordinar cada día más eficazmente sus actividades. Añadió que su delegación celebraba esta cooperación y esperaba que los representantes de la Liga de los Estados Árabes unirían sus esfuerzos a los del Comité Especial para tratar de resolver los problemas que se iban a examinar en El Cairo.

363. En nombre de la delegación de la URSS el orador deseaba al pueblo de la República Árabe Unida pleno éxito en sus esfuerzos por organizar una nueva vida, y felicidad y prosperidad.

364. El representante de Venezuela dijo que una vez más tomaba con gran satisfacción la palabra en el curso de esos cuatro años para rendir homenaje a la colaboración que la República Árabe Unida prestaba al Comité Especial. En la sesión precedente había tenido ocasión de dar las gracias a la República Árabe Unida como miembro del Subcomité de Adén. Ese día, como representante de Venezuela, y en nombre de las delegaciones de Chile, de Uruguay y de la suya propia, agradecía al pueblo y al Gobierno de la República Árabe Unida la amable invitación hecha al Comité Especial, que le permitía celebrar en El Cairo parte de sus sesiones en África. Por la cordial acogida que ofrecía a los miembros del Comité, la República Árabe Unida daba una prueba más del interés que sentía por la lucha contra el colonialismo y demostraba su posición inequívoca en favor de la acción de las Naciones Unidas en esta lucha.

365. La delegación de Venezuela apreciaba en su justo valor el valioso apoyo que la República Árabe Unida prestaba al Comité Especial y daba las gracias a su Gobierno por haber ofrecido a los miembros del Comité la posibilidad de entrar directamente en contacto con la realidad del colonialismo en aquella parte del mundo. Era indudable que la experiencia adquirida en el curso de las reuniones de El Cairo sería de gran valor y ayudaría al Comité a llevar a cabo felizmente sus trabajos y a cumplir así el mandato que le fuera confiado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

366. El representante del Irak expresó el profundo aprecio y gratitud de su delegación a un país árabe

hermano que había invitado al Comité Especial a celebrar parte de sus sesiones en El Cairo. El viaje a El Cairo era para árabes y africanos algo así como una peregrinación largo tiempo deseada.

367. Las mismas riberas del Nilo habían visto florecer una gran civilización árabe e islámica que había difundido la luz y la justicia a través de esa parte del mundo. Desde la gran revolución de 23 de julio de 1952, la República Árabe Unida había llegado a representar, para árabes y africanos, el corazón vigilante de la unidad árabe y africana, el valeroso desafío contra el colonialismo y su secuela, el sionismo internacional, el núcleo que había de concentrar todas las fuerzas para la lucha contra la dominación y la opresión extranjeras, y un refugio para los defensores de la libertad en el mundo entero.

368. En 1954 el Presidente Nasser había escrito en su obra *Filosofía de la Revolución* que no en vano su país se hallaba al sudoeste de Asia estrechamente unido al mundo árabe, cuya existencia estaba íntimamente mezclada con la de la República Árabe Unida; y tampoco en vano estaba su país situado en el nordeste de África y contemplaba desde allí todo el continente africano, escenario de la lucha más violenta entre los colonizadores blancos y los indígenas negros por la posesión de sus inagotables recursos.

369. Ciertamente, la República Árabe Unida había desempeñado y seguía desempeñando un papel prominente en la lucha contra el colonialismo sionista y su ocupación por la fuerza de una parte muy amada de la patria árabe, así como en la lucha general contra todas las formas del colonialismo en el mundo entero.

370. Añadió que estaba convencido de que las liberaciones del Comité en El Cairo tendrían tanto éxito y serían tan positivas y fecundas como las celebradas anteriormente en otras capitales africanas.

371. El representante de Bulgaria expresó a su vez la gratitud de la delegación búlgara a Su Excelencia el Sr. Gamal Abdel Nasser, Presidente de la República Árabe Unida y al pueblo y al Gobierno de la RAU, que habían invitado al Comité Especial a reunirse en El Cairo, por la calurosa acogida que habían dado a sus miembros. Los resultados del período de sesiones que el Comité celebraba entonces en África, pues ya se podía hablar de resultados, mostraban cuán profundo era el agradecimiento que debía el Comité a la RAU y a los demás países que la habían invitado a reunirse en sus respectivas capitales. No era puro azar el que la República Árabe Unida hubiese adoptado esta hospitalaria actitud, sino que ésta se derivaba en realidad de toda la política de la RAU frente a los problemas coloniales. En efecto, la República Árabe Unida estaba en la primera fila de los países africanos y de los países Miembros de las Naciones Unidas que prestaban su apoyo sistemáticamente en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Su papel en el frente antiimperialista y la ayuda que aportaban a los movimientos de liberación nacional en África, en el Cercano Oriente, en Arabia Meridional y en todas las partes del mundo en que subsistían las secuelas del colonialismo era de una importancia extrema. El discurso de Su Excelencia El Sayed Mahmoud Riad, Ministro de Relaciones Exteriores de la RAU, era una prueba más.

372. La delegación de Bulgaria, que representaba a un país amigo de la República Árabe Unida, sentía gran placer en ver con sus propios ojos cómo ante este

pueblo de cultura y civilización milenarias se abría el camino de una existencia libre e independiente. En efecto, las breves horas pasadas en la hermosa capital de la República Árabe Unida habían permitido ya a los miembros del Comité comprobar el empuje y el optimismo con que el pueblo de la República Árabe Unida edificaba su Estado bajo la dirección del Gobierno popular. El éxito de este pueblo en la esfera económica y la elevación de su nivel de vida eran una fuente de inspiración y un ejemplo para todos los pueblos que habían roto las cadenas del colonialismo. La delegación de Bulgaria estaba plenamente de acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida en que la labor del Comité durante su estancia en El Cairo revestiría una importancia especial. En efecto, el Comité debía definir los medios que permitirían aplicar lo antes posible las disposiciones de la resolución 1514 (XV), así como las resoluciones relativas a Adén y los Protectorados y a Omán aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último período de sesiones. Asimismo debía desbaratar las tentativas del Reino Unido para mantener sus bases militares en Arabia Meridional por intermedio de elementos reaccionarios y corrompidos y de gobiernos títeres, e impedirle que siguiera esclavizando a los pueblos de esos territorios.

373. Fiel a la política antiimperialista de su Gobierno, la delegación de Bulgaria podía asegurar a los representantes del Gobierno de la República Árabe Unida que prestaría todo su apoyo al Comité Especial con objeto de contribuir a la liberación de los pueblos de la Arabia Meridional. Deseaba de todo corazón al pueblo de la República Árabe Unida, al que el pueblo de Bulgaria estaba ligado por estrechos lazos de amistad y por una cooperación que acababa de entrar en una nueva e importante etapa con la reciente visita del Presidente del Consejo de Bulgaria, nuevos éxitos en la edificación de su república independiente y soberana.

374. El representante de Etiopía sumó su delegación a las anteriores manifestaciones de gratitud y aprecio por la acogida y la hospitalidad que el Gobierno y el pueblo de la República Árabe Unida habían dado al Comité Especial. Etiopía estaba acostumbrada a esa hospitalidad, de la que había podido disfrutar en la larga historia de relaciones comunes entre los pueblos de Egipto y Etiopía. Los lazos históricos, culturales y geográficos que existían entre los dos países hermanos eran tan fuertes que reducían la distancia material entre ellos a un factor insignificante. La delegación de Etiopía se encontraba, pues, en la antigua y gran ciudad de El Cairo como en su propio país.

375. Era justo que el Comité Especial examinara la cuestión de Adén y Omán durante su estancia en El Cairo; en efecto, el pueblo de la República Árabe Unida había sufrido largo tiempo bajo el dominio implacable de los colonialistas e imperialistas y esperaba con toda razón del Comité el apoyo y la asistencia que se debían a un pueblo que todavía luchaba para conseguir la libertad, la independencia y la dignidad humana.

376. Como país vecino de Adén y de toda la Arabia Meridional, Etiopía seguía muy de cerca y con el máximo interés la lucha que el valeroso pueblo de esos territorios mantenía por la libertad, la democracia y la justicia social. Deseaba, pues, asegurar al pueblo de Adén que contaba con la simpatía de su delegación por la causa que defendía y con su total apoyo a toda medida que persiguiera la rápida transición de Adén desde

su presente situación de colonia hasta la libertad plena y la independencia sin trabas.

377. La historia era testigo de que Etiopía había estado siempre al lado del mundo árabe en las épocas difíciles. Por tanto, era natural que el Gobierno y el pueblo de Etiopía apoyaran las aspiraciones de los pueblos que luchaban en las zonas del mundo árabe en que todavía persistían el imperialismo y el colonialismo. Advirtió al Reino Unido que era hora ya de que cesara su opresión y dispusiera los preparativos necesarios para una rápida y total retirada de esa zona.

378. Terminó dando las gracias al Presidente, al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por su invitación al Comité Especial y expresó la esperanza de que las reuniones de El Cairo contribuyeran a la completa eliminación del colonialismo en el mundo árabe y en todas partes.

379. El representante del Irán manifestó la gratitud de su delegación al Presidente, al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por la invitación al Comité Especial para celebrar algunas de sus sesiones en El Cairo. Era un placer especial para la delegación del Irán encontrarse entre un pueblo con el que su país estaba ligado por lazos inmutables de amistad y por una herencia común. Esos lazos, que databan de hace casi 2.000 años, se habían reforzado en la actualidad por el objetivo común de destruir de raíz el colonialismo.

380. La delegación del Irán había oído con gran atención e interés la importantísima declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida. Añadió que estaba convencido de que esa declaración serviría de gran ayuda al Comité Especial en su labor.

381. La delegación del Irán haría cuanto estuviera en sus manos para ayudar a todos los pueblos que sufrían bajo el dominio colonial a conseguir su libertad e independencia. El Comité Especial, en mayor medida que cualquier otro órgano de las Naciones Unidas, había contribuido a robustecer la confianza de esos pueblos en las Naciones Unidas y había podido conocer de cerca sus deseos y aspiraciones. El orador tenía el convencimiento de que el Comité haría una valiosa contribución para llevar a la práctica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

382. Terminó reiterando el agradecimiento de su delegación por la amistosa y cálida acogida hecha al Comité.

383. El representante de Polonia expresó la gratitud de su delegación al Presidente, al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por haber invitado al Comité Especial a reunirse en la capital de un país que era una brillante estrella en el firmamento de la lucha de liberación del mundo árabe y que desempeñaba además un papel destacado en las luchas de liberación de otras regiones. Confiaba en que la presencia del Comité Especial en El Cairo daría esperanza y aliento a los defensores de la libertad de Adén y de los territorios adyacentes que seguían siendo víctimas de la humillación, la explotación y el dominio extranjero bajo regímenes coloniales opresores y odiosos. La República Árabe Unida hacía una contribución importantísima a la realización de los nobles objetivos del progreso, la paz y la justicia y sus incansables esfuerzos en pro de la causa de su propio desarrollo socialista despertaban la admiración de todos sus verdaderos amigos. Los

cambios económicos, políticos y sociales de la República Árabe Unida eran un ejemplo visible para todo el mundo. Polonia mantenía muchos lazos de colaboración amistosa con la República Árabe Unida y ambos países veían con el mismo criterio los problemas del mundo. Polonia estimaba en mucho esas relaciones y recordaba muy bien la cálida acogida hecha al Presidente de su Consejo de Estado, Sr. Edward Ochab, durante su visita a la República Árabe Unida en noviembre de 1965. El representante de Polonia deseaba aprovechar la ocasión para transmitir al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida los ardientes votos de Polonia por nuevos éxitos en sus nobles empresas en pro de la paz, por un rápido progreso y un brillante y próspero porvenir. Deseaba también dar las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida por su importante e inspirado discurso, que había sido un nuevo testimonio de la decisión del país huésped de ayudar a las Naciones Unidas en sus esfuerzos para destruir al colonialismo en todas partes. Deseaba asimismo expresar la gratitud de su delegación a la Liga de los Estados Árabes por los servicios prestados al Comité.

384. La delegación de Polonia apoyaba la justa y legítima lucha del pueblo de Adén y de toda la Arabia Meridional y, al expresar su profundo aprecio al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por su invitación, reiteraba sus más cordiales votos de paz, progreso y justicia social.

385. El representante de la República Unida de Tanzania dio las gracias al Presidente, al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por su cordial recibimiento, y expresó su satisfacción por la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del Presidente Nasser. Aseguró al Sr. Riad que el Comité tendría debidamente en cuenta las sabias palabras del Presidente.

386. Desde que la República Árabe Unida alcanzara en 1952 la condición de Estado libre, su pueblo, bajo la dirección del Presidente Nasser, había defendido invariablemente los derechos humanos, y sobre todo, el derecho a la independencia política, de los países que se hallaban todavía bajo el yugo del colonialismo. Los hechos y no las palabras habían demostrado el espíritu de la República Árabe Unida. Era bien sabido que ésta apoyaba al Comité de Liberación de la OUA, cuya sede estaba en Dar es Salaam. A costa de un gran sacrificio, la República Árabe Unida se había esforzado en liberar a los pueblos explotados por las Potencias extranjeras, había renunciado al comercio con Sudáfrica, y no había vacilado en romper las relaciones diplomáticas con el Reino Unido a raíz de la cuestión de Rhodesia del Sur.

387. Lo que la República Árabe Unida había hecho por África escapaba a todo elogio, y complacía al orador que el Comité Especial pudiera celebrar algunas de sus sesiones en El Cairo, pues la República Árabe Unida había extendido al Oriente Medio la lucha contra el colonialismo, y se preocupaba especialmente por Adén. El Reino Unido tenía intereses creados en esos territorios y sostenía que su presencia hacía progresar a los pueblos autóctonos como pretexto para no cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Añadió que quería, a ese respecto, rendir tributo a los muchos que habían sacrificado su vida en la lucha por la independencia de sus respectivos países.

388. La República Unida de Tanzania, como la República Árabe Unida, país con el que tenía vínculos per-

manentes de amistad, había luchado siempre contra el colonialismo. Reiteró a la RAU el firme apoyo de su Gobierno y su convicción personal de que, con la ayuda del Comité, el pueblo de Adén obtendría su libertad.

389. El representante de Yugoslavia dio las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores y al Presidente por sus mensajes de bienvenida. Añadió que le complacía sobremedida encontrarse en la República Árabe Unida. El Cairo era el lugar más indicado para que el Comité celebrara una reunión ya que era bien sabido que la República Árabe Unida había desempeñado un papel sobresaliente en el proceso de descolonización y en la liberación de África, y había dado un ejemplo excepcional a los demás países.

390. Yugoslavia tenía muchos vínculos de amistad y cooperación con la República Árabe Unida. Ambos estaban interesados en mantener la paz y la seguridad internacionales, erradicar todas las formas de dominación extranjera y mejorar las relaciones internacionales basándose en la no intervención. Esos vínculos se habían reafirmado hacía poco al reunirse por decimoséptima vez los Presidentes Tito y Nasser. La delegación de Yugoslavia estaba segura de que la labor del Comité en El Cairo sería fructuosa.

391. El representante de Siria estimaba que ninguna expresión de homenaje y agradecimiento bastaría para hacer justicia al Presidente, al Gobierno y al valiente pueblo de la República Árabe Unida. La hospitalidad tenía hondo arraigo en este país y era algo propio de la vida cotidiana. El colonialismo había sufrido sus fracasos más humillantes en la República Árabe Unida, país cuya postura contraria a la opresión era una profesión de fe y no una actitud política. La defensa que la República Árabe Unida hacía de los pueblos subyugados era un deber sagrado, y no una decisión del momento. La República Árabe Unida había apoyado la causa de la emancipación y de la justicia prescindiendo de consideraciones de raza y estaba dispuesta a liquidar los últimos baluartes del colonialismo así como el legado inhumano que había dejado: el subdesarrollo, la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo, la división y la degradación. Como había dicho el propio Presidente Nasser, el colonialismo era una fuente básica del mal. Si se había de erradicarlo, habría que erradicar también a los instrumentos de que se servía.

392. La República Árabe Unida era un notable ejemplo de progreso, y El Cairo se había convertido en el lugar de reunión de las fuerzas progresistas del mundo árabe y de otras partes, coordinadas por la República Árabe Unida.

393. Los objetivos que perseguía la República Árabe Unida eran los mismos que los del Comité Especial. El mensaje del Presidente Nasser sería motivo de inspiración para el Comité, como había señalado el Presidente del Comité. En la época actual, con la gran difusión del saber, no se podía engañar al público con regímenes títeres montados por el colonialismo para perpetuar su explotación de la mano de obra y los recursos naturales.

394. En nombre de la República Árabe Siria, de su pueblo y de su Gobierno, el orador expresó su profunda gratitud a la República Árabe Unida, así como su solidaridad e identidad de ideales con ella, y le deseó toda clase de éxitos en su noble empeño a favor de la causa de la humanidad, a la vez que agradecía sinceramente a la Liga Árabe la ayuda que había prestado al Comité.

395. El representante de Malí dio las gracias al pueblo y al Gobierno de la República Árabe Unida así como al Presidente Nasser por su amable invitación al Comité Especial y por el cordial recibimiento que se le había hecho.

396. Desde el siglo VI, Malí y la República Árabe Unida estaban unidos por vínculos étnicos, históricos y culturales. Pese a haber estado separados por el colonialismo durante casi tres cuartos de siglo, se habían hallado al día siguiente de su liberación más unidos que nunca para librar la lucha final contra el colonialismo viejo y nuevo y contra el imperialismo.

397. Malí seguía con atención especial y legítimo orgullo los esfuerzos desplegados por la República Árabe Unida para consolidar su independencia y superar el subdesarrollo. Toda victoria del pueblo egipcio era una victoria de Malí, una victoria africana contra los enemigos comunes: el colonialismo y el imperialismo. Uno y otro estaban destinados a desaparecer, pues todos los pueblos acabarían por liberarse; como había dicho el Secretario General Administrativo de la OUA, no era más que cuestión de tiempo y de circunstancias.

398. El hecho mismo de haber invitado al Comité Especial a celebrar una parte de su período de sesiones en El Cairo muestra el interés que la República Árabe Unida tiene por los problemas de la descolonización.

399. El orador esperaba complacido tener oportunidad de oír en aquella ciudad a los verdaderos representantes de Adén y de Omán, que en nombre de sus pueblos hablarían del comportamiento inhumano e inadmisible del Gobierno del Reino Unido en esos territorios. El Gobierno del Reino Unido debía aplicar las resoluciones pertinentes del Comité Especial y de la Asamblea General sobre Adén y los Protectorados de Adén; el pueblo de Omán, en especial, tenía derecho como los demás a la libre determinación y a la independencia en condiciones que respondieran a sus aspiraciones.

400. Por último, expresó su agradecimiento al valiente pueblo de la República Árabe Unida por todos sus esfuerzos contra las fuerzas retrógradas del colonialismo y contra los regímenes abyectos de Verwoerd, Salazar y Ian Smith, e hizo votos por la felicidad de los dirigentes de la República Árabe Unida, del Presidente Gamal Abdel Nasser y de su pueblo.

401. El representante de Australia dijo que se había sentido doblemente emocionado por la cordialidad con que había sido recibido el Comité Especial en la histórica ciudad de El Cairo. La civilización florecía en la sabiduría, en las artes y en la cultura que se desarrollaban en esa ciudad cuando el resto del mundo se hallaba todavía en la barbarie. En nombre de su delegación expresó su más profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida y presentó cordiales saludos al gran pueblo árabe, que tan importante papel estaba desempeñando en el mundo moderno. La delegación de Australia apreciaba el mensaje del Presidente Nasser y le sería grato comunicarlo al Gobierno australiano; rogó al Ministro de Relaciones Exteriores que se sirviese transmitir su respetuoso agradecimiento al Presidente.

402. El representante de la India manifestó que su país no era un extraño para la República Árabe Unida. Muchos y diversos vínculos habían existido entre los dos países durante miles de años. Añadió que le había impresionado vivamente la magnificencia de El Cairo y le parecía muy lógico que el Comité Especial se reu-

niese allí. Más aún, ello era un honor para el Comité, no sólo por los nobles objetivos que perseguía la República Árabe Unida, sino también por el cordial recibimiento que le habían dispensado sus ciudadanos.

403. Recordó que, con ocasión del ataque lanzado contra la República Árabe Unida cuando los sucesos de Suez, su país había sido uno de los primeros en prestarle ayuda; cuando la India obligó a los portugueses a salir de Goa, la República Árabe Unida a su vez le prestó ayuda. Además, la India había sido el primer país en establecer relaciones diplomáticas con la Liga de los Estados Árabes. Dio las gracias al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por su hospitalidad, y al Presidente, por su cordial mensaje.

404. El representante de Dinamarca se sumó a los oradores anteriores para dar las gracias a las autoridades que habían acogido al Comité Especial. La delegación de Dinamarca se complacía sobremedida en participar en la reunión de El Cairo, cuna de una gran civilización de la que Europa tantos beneficios había recibido. La preclara historia de la República Árabe Unida era bien conocida, pero esa historia era también el fondo en el que se desarrollaban las actuales tareas del país. Era pues apropiado que el Comité se reuniera en El Cairo, pues la República Árabe Unida había seguido durante muchos años una política anticolonialista. A ese respecto, la delegación de Dinamarca agradecía al Presidente Nasser y al Sr. Riad sus mensajes, en los que se resumían claramente los problemas que habrían de examinarse.

405. Dinamarca mantenía relaciones de amistad con la República Árabe Unida, y el orador esperaba que la RAU continuara progresando hacia un brillante porvenir de prosperidad y paz.

406. El representante de Italia dijo que la visita a El Cairo tenía especial importancia para su delegación, no sólo porque Italia mantenía relaciones cordiales con la República Árabe Unida, sino también porque la historia de los dos países estaba estrechamente ligada. La invitación de la República Árabe Unida era símbolo de la confianza que tenía en la labor del Comité Especial y de las Naciones Unidas un país que había emprendido con tanta valentía la organización de su porvenir. Agradeció al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida esa confianza, y expresó la admiración de su delegación por las realizaciones de la República Árabe Unida y sus mejores deseos para el porvenir.

407. El representante de Madagascar dijo que le complacía expresar al Presidente Gamal Abdel Nasser así como al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida su más profundo agradecimiento por la invitación hecha al Comité Especial para que celebrara parte de su período de sesiones en esa magnífica capital, El Cairo.

408. Se declaró convencido de que la estancia del Comité Especial en la República Árabe Unida le permitiría avanzar hacia la solución de los problemas incluidos en su programa.

409. Para terminar, rindió homenaje al Gobierno de la República Árabe Unida por el cordial recibimiento dado a los miembros del Comité Especial, y apreció el valor de la hospitalidad que se le había ofrecido.

410. El representante de Túnez dio las gracias al Presidente Nasser así como al Gobierno y a la República Árabe Unida por su generosa invitación al Co-

mité Especial. Rindió homenaje igualmente al Ministro de Relaciones Exteriores por su alocución, en la que el Comité Especial se inspiraría sin duda para frustrar las intrigas de las Potencias colonialistas.

411. No bastaba declararse contra el colonialismo: había que hallar el medio de evitar sus efectos perniciosos. Correspondía al Comité Especial llamar la atención de la opinión internacional sobre esa tarea del mundo moderno, a fin de poner todo en juego y eliminarlo para siempre.

412. Añadió que expondría en otro momento el punto de vista de su delegación sobre la situación de Adén y de los Protectorados de Adén. Por el momento se limitaría a reafirmar que no podía tolerarse ninguna influencia extranjera en esos territorios y que no escatimaría ningún esfuerzo para que las resoluciones de las Naciones Unidas se aplicaran íntegramente en ellos.

413. El representante de Afganistán se asoció a las expresiones de agradecimiento de los demás miembros del Comité Especial al Gobierno de la República Árabe Unida por la generosa invitación a celebrar sus sesiones en la hermosa ciudad de El Cairo en las orillas del gran Nilo. Esa hospitalidad, aparte de responder a las magníficas tradiciones del país, demostraba una gran confianza en la labor del Comité.

414. Declaró que le había complacido mucho el alentador mensaje del Presidente Nasser y que estaba seguro de que el Comité tendría debidamente en cuenta sus sabias palabras.

415. Era motivo de especial satisfacción para la delegación del Afganistán encontrarse en El Cairo, dados los innumerables vínculos de amistad entre el Afganistán y la República Árabe Unida, países que tenían una política común de no alineación y una religión común.

416. El representante de la Costa de Marfil deseaba sumar su voz a la de los oradores que le habían precedido para agradecer al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida su generosa invitación al Comité Especial y su recibimiento fraternal y cordial.

417. Esa invitación tenía tanto más valor cuanto que la República Árabe Unida luchaba para mejorar la suerte de su pueblo y remediar las consecuencias nefastas del subdesarrollo, demostrando así una vez más su interés por los trabajos del Comité Especial y la importancia que asignaba a la eliminación completa del colonialismo en el mundo en general y en el sur de la península arábiga en particular.

418. La posición del Gobierno de la Costa de Marfil en los problemas coloniales era bien conocida; bastaba recordar que era partidario de la libre determinación de los pueblos y de la transferencia progresiva y ordenada de todos los atributos de la soberanía a los representantes auténticos de los países bajo dominación extranjera. Por ello, durante los trabajos del Comité Especial en El Cairo, no escatimaría ningún esfuerzo para buscar, en colaboración con las demás delegaciones, las vías y medios que permitieran al Comité cumplir el mandato que le había confiado la Asamblea General.

419. Por último, hizo votos por la felicidad y prosperidad del Gobierno y del pueblo de la República Árabe Unida.

420. El representante de Sierra Leona estimaba muy oportuno que el Comité Especial se reuniera en la

República Árabe Unida, pues ese país presentaba un puente geográfico y cultural entre el mundo árabe de África y de Asia.

421. Era particularmente apropiado que el Comité discutiese en El Cairo los problemas que interesaban a africanos y asiáticos, incluidas las cuestiones de Adén y Omán. Por oponerse al colonialismo y neocolonialismo, su país compartía la esperanza y la determinación que la República Árabe Unida tenía de liberar el yugo del colonialismo a los pueblos sometidos. La tarea que incumbía al Comité era asegurar que el Reino Unido aplicara las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Adén y Omán.

422. Dio las gracias al Presidente de la República Árabe Unida por su alentador mensaje y añadió que su delegación estaba convencida de que la estancia del Comité en El Cairo sería agradable y fructuosa.

423. La representante de los Estados Unidos de América dijo que complacía sobremanera a su delegación visitar El Cairo atendiendo a la generosa invitación de las autoridades del país. El representante del Irak había dicho que ir a El Cairo era un privilegio espiritual para los árabes; era también un privilegio para todos los pueblos del mundo civilizado. El sentimiento de todos los miembros del Comité Especial era de admiración y respeto por las continuas realizaciones del pueblo del valle del Nilo, que se habían iniciado antes de los albores de la historia.

424. La República Árabe Unida tenía un glorioso porvenir sobre todo ahora que su pueblo podía decidir el propio destino. La oradora añadió que su país mantenía desde hacía mucho relaciones amistosas con la República Árabe Unida y se complacía especialmente en que el Comité hubiese podido reunirse en El Cairo.

425. Dio las gracias al Presidente y al Ministro de Relaciones Exteriores por sus discursos de bienvenida, y dijo que esperaba con interés las importantes deliberaciones del Comité en la hermosa e histórica ciudad de El Cairo. Estaba segura de que la generosidad del Gobierno y del pueblo de la República Árabe Unida contribuirían al éxito de las sesiones del Comité en esa ciudad.

426. El representante de la República Árabe Unida quería expresar al Presidente y al Comité Especial el sincero agradecimiento de su Gobierno por la generosidad y la elegancia con que se habían referido a su país. Esas palabras eran más que una simple cortesía: eran un estímulo para el Gobierno de la República Árabe Unida en el difícil camino de la no alineación. Su Gobierno se había reservado el derecho de juzgar cada una de las cuestiones que se planteaban en el mundo atendiendo a las circunstancias del caso, y el orador creía que ese era también el criterio de las Naciones Unidas. Los alentadores discursos pronunciados durante la mañana contribuirían a fortalecer los propósitos de su país en esa senda solitaria y difícil.

427. El Gobierno de la República Árabe Unida se complacía también de que el Comité se reuniera en El Cairo. Las Naciones Unidas representaban los ideales y los sueños de la humanidad y la presencia del Comité en El Cairo hacía que esas aspiraciones fueran más tangibles.

428. El Comité era uno de los órganos más efectivos de las Naciones Unidas, y eran muchas las esperanzas puestas en sus trabajos; el orador estaba seguro de que esas esperanzas se verían justificadas.

429. La República Árabe Unida había trabajado pacientemente en pro de la solidaridad a fin de impulsar la causa de la libertad, justicia y paz duradera que eran los objetivos de las Naciones Unidas. Asimismo prestaría al Comité la más amplia cooperación a fin de que sus trabajos fueran fecundos y su permanencia en El Cairo un éxito.

430. Pidió permiso para hablar más adelante en el Comité sobre puntos concretos del programa, y agradeció a los miembros que le hubiesen dado la oportunidad de hacer una declaración.

Clausura de las reuniones

Declaraciones generales

431. El representante del Secretario General expresó al Gobierno de la República Árabe Unida la profunda gratitud de la Secretaría por su generosa hospitalidad y por toda su asistencia durante las sesiones celebradas por el Comité Especial en El Cairo. La Secretaría expresaba también su más sincero agradecimiento al Secretario General de la Liga de los Estados Árabes y a sus colegas por haber puesto a disposición del Comité su magnífica sala de conferencias, así como sus instalaciones y servicios.

432. El Presidente manifestó al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida el sincero agradecimiento del Comité Especial por la generosa hospitalidad que se le había brindado durante su breve estada en El Cairo. La contribución que habían aportado a la causa de la libertad y la justicia para todos los pueblos oprimidos del mundo era tan notoria que holgaba referirse a ella en detalle. Por lo tanto, bastaría con decir que, fuese dentro de la organización de la Unidad Africana, como uno de los países no alineados, o en las Naciones Unidas, la República Árabe Unida, bajo la dinámica dirección de su infatigable y hábil Presidente, el Sr. Gamal Abdel Nasser, había sido siempre portadora de la antorcha de la libertad en un mundo ensombrecido por las fuerzas del colonialismo.

433. Por ello, el Comité Especial consideraba un singular honor el haber sido invitado por el Gobierno de la República Árabe Unida a reunirse en ese país. Esa invitación podría también interpretarse como un reconocimiento especial de la labor que realizaba el Comité, ya que El Cairo había llegado a ser considerado como un importante asilo de todos los pueblos del mundo amantes de la libertad. Además de aportar su constructiva contribución a los trabajos del Comité, el Gobierno y el pueblo de la República Árabe Unida habían hallado tiempo para prodigarle su hospitalidad de acuerdo con la auténtica tradición africana y árabe, por lo cual el Comité les estaba profundamente agradecido. En nombre de todos los miembros del Comité Especial quería expresar con particular orgullo su gratitud al Gobierno y al pueblo de la República Árabe Unida por todas las facilidades que le habían dado.

434. También dio las gracias a la Liga de los Estados Árabes por haber puesto su sala a disposición del Comité Especial, proporcionándole además todos los servicios de conferencias necesarios. Había sido muy oportuno que el Comité debatiese allí las cuestiones de Adén y Omán, ya que la Liga de los Estados Árabes era la esforzada defensora de la libertad y la justicia en el mundo árabe.

435. El Comité Especial había logrado importantes progresos en lo respectivo a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a

los países y pueblos coloniales, en la medida que ésta afectaba a Adén y Omán. La resolución aprobada esa tarde sobre la cuestión de Adén (A/AC.109/179/Rev.1) contenía importantes recomendaciones que debían contribuir a la solución del problema. Como se recordaría, en el párrafo 12 de la mencionada resolución se pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia administradora, designara inmediatamente una misión especial para Adén a fin de recomendar las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y en especial determinar el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, y de presentar al Secretario General, a la mayor brevedad posible, un informe que sería transmitido al Comité Especial. Cabía esperar que al darse cumplimiento a ese importante párrafo de la parte dispositiva se ayudaría al pueblo de Adén a alcanzar la meta de una independencia y una libertad auténticas.

436. En lo tocante a la cuestión de Omán, los peticionarios habían comunicado al Comité datos sumamente pertinentes que le ayudarían a evaluar la situación en el Territorio y a llegar a conclusiones adecuadas. En su resolución 2073 (XX), la Asamblea General reconocía el derecho inalienable del pueblo del Territorio en conjunto a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con sus deseos libremente expresados. El orador aseguró a los peticionarios, en nombre del Comité Especial, que éste tendría presentes en todo momento esas ideas cuando volviese a examinarse la cuestión de Omán en Nueva York.

Declaración del Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida

437. El Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida dio las gracias, en nombre del pueblo, del Gobierno y del Presidente de la República Árabe Unida, al Comité Especial y a su secretaria por la labor que habían desarrollado. Los pueblos que continuaban luchando por liberarse del colonialismo tenían en el Comité campeones capaces y elocuentes, y el orador confiaba en que sus esfuerzos serían coronados con un éxito duradero. También dio las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por haber enviado un representante especial a las sesiones de El Cairo. El Gobierno de la República Árabe Unida tenía una confianza sin reservas en el Secretario General y sabía que éste no escatimaría esfuerzos para lograr el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General, y de esa manera, defender la justa causa por la que trabajaba el Comité. Los nacionalistas de esa parte del mundo sabían muy bien que sólo podían esperar de las Naciones Unidas apoyo moral, pero estaban satisfechos y agradecidos por el mismo en su lucha por la libertad, y agradecían también una legítima oportunidad de progreso y felicidad.

438. Al Gobierno de la República Árabe Unida le complacía saber que el Comité Especial mantendría la cuestión de Arabia Meridional en su programa pero abrigaba la esperanza de que no fuese necesario mantenerlo en él demasiado tiempo.

Declaración del Secretario General Interino de la Liga de los Estados Árabes

439. El Secretario General Interino de la Liga de los Estados Árabes manifestó su profundo agradeci-

miento al Comité Especial por su infatigable labor y su valioso apoyo a la causa de la libertad. La Liga de los Estados Arabes consideraba un gran privilegio haber recibido al Comité, y esperaba que sus trabajos continuaran teniendo éxito.

E. REUNIONES CELEBRADAS EN ARGEL, ARGELIA

Apertura de las reuniones

Mensaje del Presidente del Consejo Revolucionario y Jefe del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular

440. A petición del Presidente, se leyó ante el Comité un mensaje de bienvenida del Presidente del Consejo Revolucionario y Jefe del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular. El texto del mensaje era el siguiente:

"Señor Presidente, en el momento en que se inicia en Argel un nuevo período de sesiones de ese Comité, es para mí un placer darles la bienvenida a nuestro país y manifestarles en nombre del Consejo Revolucionario y del Gobierno que es para nosotros una gran satisfacción y, al mismo tiempo, un gran honor recibirles en Argelia para llevar a cabo una misión que figura entre nuestras más urgentes preocupaciones.

"La lucha contra la dominación colonial, en todas sus formas y en todos los continentes, es uno de los elementos constantes de nuestra política y de nuestra acción. La presencia de ustedes en Argel para estudiar los problemas de la descolonización tiene, pues, para nosotros un valor simbólico y reviste un importantísimo significado. En Argelia encontrarán el máximo eco a sus trabajos, entre un pueblo que fraterniza con todos los que luchan y sufren para conquistar la libertad.

"También nos alegramos de poder reafirmar nuestra adhesión a las Naciones Unidas y expresar todas las esperanzas que en ellas tenemos puestas para fomentar la comprensión entre los hombres y la amistad sincera entre los pueblos. Creemos en la importancia de su papel para preservar y consolidar la paz en el mundo y le brindamos nuestra confianza en el desempeño de su elevada y noble misión.

"Les deseo un éxito completo en sus trabajos y una estancia agradable en nuestro país, que hará cuanto esté a su alcance para recibirles dignamente, como huéspedes y, al mismo tiempo, como amigos."

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular

441. El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular recordó que Argel era la última etapa del periplo en Africa del Comité Especial. Su estancia en varias capitales del continente africano le había permitido ponerse en directo contacto con diversos movimientos de liberación y, de este modo, completar su información sobre los problemas de la descolonización, situándolos en su contexto y considerándolos en su realidad propia. El método empleado por el Comité en su viaje por Africa debería estudiarse, enriquecerse y, eventualmente, ampliarse para buscar todas las soluciones que pudieran rejuvenecer, reforzar y afianzar a las Naciones Unidas.

442. Argelia se congratulaba de recibir a su vez la visita del Comité y de contribuir al éxito de su misión.

Argelia había esperado mucho de las Naciones Unidas y había recibido mucho de ellas, cuando estaba entregada en cuerpo y alma a la guerra de liberación, por ello consideraba un deber dar su apoyo total y sin reservas a la labor del Comité, favorecer su acción y contribuir a la realización de los objetivos que se había fijado y que, tanto por la convicción como por la acción, compartía íntimamente Argelia.

443. Argelia, ayer colonizada y hoy independiente tras de una lucha encarnizada y sangrante, hacía suya la causa justa y legítima de los pueblos que luchaban todavía contra la dominación colonial. Los movimientos de liberación de esos pueblos encontraban comprensión y apoyo en un pueblo que compartía sus preocupaciones y sus esperanzas y que los sostenía en sus esfuerzos y en sus sacrificios.

444. Por lo tanto, el Comité Especial tendría oportunidad de establecer amplio contacto con los responsables de esos movimientos y encontraría en esa tierra, todavía jadeante tras su choque con el colonialismo, un marco especialmente adecuado para estudiar los problemas que se proponía abordar.

445. Dio la bienvenida a los miembros del Comité y les saludó en nombre del Consejo Revolucionario, del Frente de Liberación Nacional y del Gobierno, y les dio las gracias por haber escogido a Argel como sede de una de sus reuniones en Africa.

446. Luego recordó que la desaparición de la dominación colonial había llegado a ser objetivo internacional cuando acabó la Segunda Guerra Mundial; el reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación, inscrito en la Carta de las Naciones Unidas, había despertado grandes esperanzas en los pueblos oprimidos; se abría una nueva era que debía señalarse por la eliminación definitiva del colonialismo.

447. Si durante los últimos veinte años había habido muchos países que, efectivamente, habían reconquistado su independencia, su liberación no siempre había sido fácil y muchas veces sólo habían conseguido sacudir el yugo colonial gracias a inmensos sacrificios. El impulso generoso de fraternidad humana manifestado al acabar la guerra se estaba apagando poco a poco, mientras que el imperialismo, que en un momento se vio amenazado, había vuelto a encontrar su vocación y trataba de mantener y de reforzar su dominio. El propio objetivo de la misión del Comité Especial ponía de manifiesto la magnitud y la dificultad de la labor que todavía quedaba por realizar para liberar a los pueblos aún colonizados, obligados a recurrir a la violencia y a librar un desigual combate para conseguir que se reconocieran sus derechos más elementales a la libertad, a la justicia y a la dignidad. La lucha contra el colonialismo continuaba, a veces marcada por la obstinación de las Potencias imperialistas en perpetuar un régimen de explotación colonial y por la voluntad cada día mayor de los pueblos colonizados de acabar con esa dominación. Ese antagonismo irreconciliable entre las fuerzas que servían a la opresión y la fe en la justicia y en la libertad desencadenaba la violencia. Allí donde subsistía un régimen colonial surgía un foco de tensión que provocaba la acción valiente y, con frecuencia, heroica de los movimientos de liberación.

448. Si el Comité había situado en Africa las etapas de su itinerario, no se debía al azar, sino a que era especialmente en Africa donde continuaba el combate contra el colonialismo y donde muchos países seguían sufriendo bajo el yugo extranjero. Mientras las otras

Potencias europeas que habían participado en la colonización de África habían modificado su actitud y su conducta, voluntariamente o bajo la presión de los pueblos africanos, Portugal se obstinaba ciegamente en proseguir su política de explotación colonial, haciendo caso omiso de las aspiraciones profundas de los pueblos e infringiendo todos los compromisos de la sociedad internacional respecto de los países colonizados. Esa política retrógrada sometía a uno de los últimos paladines de un colonialismo anacrónico inmensas regiones de África y ponía a sus pueblos a la merced de los explotadores portugueses. En Angola, las autoridades portuguesas intensificaban su esfuerzo bélico para hacer frente a una lucha armada de liberación que duraba ya desde hacía más de cinco años, pero no por ello se debilitaba la determinación de los patriotas angolanos que acabaría fatalmente por triunfar contra la obcecación de la Potencia colonial. Lo mismo ocurría en Guinea y en las Islas de Cabo Verde. Aunque en Mozambique se había desencadenado la lucha armada hacía menos tiempo, no por ello dejaba de ser de una crueldad y una violencia ante las que la opinión internacional no podía permanecer indiferente.

449. En la situación de Rhodesia del Sur se encontraba directamente comprometida la responsabilidad del Reino Unido que, pese a todas sus promesas, había preparado la subida al poder de un régimen racista. La proclamación unilateral de la independencia por Ian Smith, consecuencia lógica de la política británica, constituía un desafío y una provocación a la opinión africana y a la opinión internacional. Colocaba al pueblo de Zimbabwe bajo el yugo de una minoría blanca, creando así un régimen de segregación racial a imagen del de Sudáfrica. Se trataba de una ofensa grave contra la libertad de un pueblo africano y, al mismo tiempo, de una ofensa inadmisible a su dignidad. La conciencia africana no podía permanecer impasible ante esta nueva agresión, que ya había denunciado ante la opinión internacional y contra la cual sabría movilizar todas las fuerzas de África. Nunca se subrayaría bastante el carácter de gravedad del problema de Rhodesia del Sur que hacía pesar directamente las más terribles amenazas sobre el continente africano y respecto al cual era indispensable que cada miembro de la comunidad internacional pesara las responsabilidades que le incumbían.

450. El régimen de Ian Smith encontraba aliados naturales en Sudáfrica y en Portugal, doble alianza basada en su doble carácter racista y colonialista. La política de apartheid aplicada en Sudáfrica había sido firmemente condenada en las instituciones internacionales, pero actualmente estaba claro que el Gobierno de Pretoria persistía impunemente en su actitud y tornaba ineficaces las sanciones económicas tomadas contra él. Ese ejemplo elocuente mostraba hasta qué punto estaba bien fundado el escepticismo de los africanos respecto de la eficacia de las medidas de tipo económico adoptadas por el Gobierno del Reino Unido contra el régimen de Ian Smith. Sin embargo, el Jefe del Gobierno del Reino Unido se había comprometido firmemente a tomar todas las medidas necesarias para restablecer la situación en Rhodesia del Sur y había pedido a los países africanos del Commonwealth un plazo de seis meses para demostrarles que su política de sanciones económicas bastaría para lograr el objetivo que, al parecer, se buscaba. Eso ocurría a principios del año 1966, y el plazo que se había concedido al Sr. Wilson ya había expirado. Era difícil decir que el régimen de

Ian Smith estaba a punto de hundirse víctima de las medidas coercitivas imaginadas por el Primer Ministro del Reino Unido, y peor todavía, se estaban celebrando negociaciones entre los racistas de Salisbury y los representantes del Gobierno del Reino Unido. Cabía preguntar si creían que así embaucaban a la opinión internacional. La actitud del Gobierno de Argelia estaba clara y las tergiversaciones del Reino Unido ya no engañaban a nadie. Sólo una política de firmeza podía acabar con la rebelión de Ian Smith. Las vacilaciones actuales no contribuían para nada a resolver el problema; preparaban para el porvenir un período de violencia en el que, una vez más, todos los africanos y todos los hombres libres del mundo participarían al lado del pueblo de Zimbabwe.

451. El colonialismo británico no se manifestaba únicamente en el continente africano. En Arabia Meridional, en Adén, en Omán, los pueblos luchaban para librarse de la dominación del Reino Unido y su combate revestía los mismos aspectos que en los países colonizados de África. También en este caso la explotación de las riquezas del país y el mantenimiento de posiciones estratégicas seguían sirviendo de base para la dominación colonial. Los intereses egoístas de la Potencia colonial, oponiéndose obstinadamente a la decidida voluntad de liberarse de los pueblos, provocaban aquí los mismos choques sangrientos.

452. El problema de Palestina revestía también el mismo carácter colonial. El pueblo árabe de Palestina que, en nombre de no se sabía qué justicia, tenía que pagar por los crímenes nazis contra los judíos, había tenido que exiliarse de su propio país, y estaba privado de su patria. Tal vez las Potencias que habían contribuido a la creación del Estado artificial de Israel habían querido resolver un problema humano que el sufrimiento del pueblo judío planteaba sin duda alguna ante la conciencia internacional. Pero la situación incalificable en la que habían sumido a millones de habitantes de Palestina, transformados en refugiados miserables junto a las fronteras de su país, representaba también una tragedia humana cuya intensidad y dimensiones no podían dejar de conmover a la conciencia internacional. Las contribuciones voluntarias que, por otra parte, cada día de peor gana aportaban ciertas grandes Potencias en favor de los refugiados de Palestina, no podían disimular su responsabilidad en un problema cuyo carácter social y humanitario no hacía sino acentuar su naturaleza política.

453. Indudablemente se trataba de la expoliación de un país y de la expulsión de un pueblo al que se habían robado sus riquezas y, por lo tanto, de un problema colonial. La situación actual no ofrecía al pueblo palestino más perspectiva que la de reconquistar su patria por las armas: a ello se preparaban y tal era el objetivo que se había propuesto conseguir la Organización de Liberación de Palestina. Las Naciones Unidas no podrían seguir eludiendo por mucho más tiempo la verdadera naturaleza de ese problema, que pesaba sobre el equilibrio del Oriente Medio y constituía por ende una amenaza permanente para la paz del mundo. La injusticia que se había cometido contra el pueblo de Palestina debía remediarse y, en interés general, debían contribuir a ello todos los países que se proclamaban partidarios de la igualdad de los pueblos y de que éstos pudiesen disfrutar libremente sus derechos inalienables.

454. Cuando se consideraban los problemas que planteaba la dominación colonial y las amenazas que re-

presentaban para la humanidad, no era posible pasar por alto la guerra que actualmente hacía estragos en el Viet-Nam, cuya agravación paulatina y cuyo carácter mortífero ponían directamente en peligro la paz del mundo. Los móviles de la agresión en el Viet-Nam del Sur no podían de ningún modo justificar los sufrimientos de un pueblo, cuyos sacrificios merecían ampliamente que se reconociera su derecho a la paz y a la libertad. No podía juzgarse de la misma manera a los extremistas norteamericanos, en actitud belicosa, y al pueblo de los Estados Unidos cuya conciencia se sublevaba por una guerra impuesta a un país pequeño que oponía una resistencia heroica a esa empresa imperialista. Por ello cabía afirmar que la razón triunfaría, y esa misma razón imponía que se tuviese en cuenta la realidad. En efecto, era una realidad que el pueblo de Viet-Nam del Sur seguiría combatiendo sin tregua contra la intervención extranjera que trataba de imponérsele. También era una realidad que la resistencia del pueblo se apoyaba en el Frente Nacional de Liberación (FNL) que canalizaba su energía, organizaba su lucha y, por ello, era la única entidad calificada para contraer compromisos sobre el porvenir del país. Todo intento sincero de resolver ese conflicto, que suscitaba la reprobación de todos los pueblos y, en primer lugar, la del pueblo norteamericano, debería necesariamente aceptar al FNL como único interlocutor válido y portavoz auténtico del pueblo de Viet-Nam del Sur. Cualquier otra manera de enfocar el problema estaba condenada al fracaso y sólo podía representar una maniobra dilatoria o una operación de diversión. Era posible expresar esa opinión con toda serenidad, porque Argelia sentía los sufrimientos del pueblo vietnamés y porque estaba convencida de que el porvenir de la humanidad se basaba primeramente en la amistad entre pueblos libres e iguales.

455. La misión del Comité Especial era, sin duda alguna, harto pesada y vasta. La descolonización seguía siendo un problema agobiante fuera del mundo actual, y sus aspectos múltiples y diversos encubrían una base constante y permanente, es decir, el derecho de los pueblos a gozar de su libertad y de una vida más digna. La dominación colonial, la explotación del hombre por el hombre, el mantenimiento de una parte de la humanidad en un estado de degradación moral e intelectual, eran una tarea en un mundo en el que la ciencia realizaba cotidianamente milagros que ampliaban los horizontes de los hombres y ofrecían un porvenir brillante y lleno de promesas para los pueblos. La supervivencia anacrónica del régimen colonial cuando el hombre se liberaba de sus ligaduras terrestres suponía más que nunca una responsabilidad internacional, porque era evidente que la paz del mundo seguiría siendo aleatoria mientras hubiese pueblos privados de sus derechos más elementales.

456. Sin embargo, la descolonización no surgía exclusivamente como un problema político y las luchas de liberación a las que daba lugar eran sólo su aspecto más sensible y más directamente perceptible. Antes que nada, era también un estado de espíritu, un concepto nuevo de las relaciones entre los pueblos, que debería grabarse en los espíritus y en las costumbres y sustituir los antagonismos entre razas y pueblos por la conciencia de la solidaridad humana y la necesidad de una cooperación real entre los hombres. La descolonización del espíritu debería, pues, preceder y acompañar a la empresa de liberación de los pueblos.

457. Sin esa transformación, sin esa revolución en las normas de la moral internacional, la obra de la descolonización quedaría incompleta y no conseguiría eliminar todos los problemas que trataba de resolver. Porque descolonizar un pueblo no era sólo liberarlo de una dominación directa, tanto más indignante cuanto que se manifestaba claramente y se ejercía sin tapujos. Descolonizar un pueblo era también — principalmente — librarlo de toda intervención extranjera, garantizarle la libre administración de sus bienes, permitirle que, sin traba alguna, recorriese el camino del progreso. Era un hecho innegable, y desgraciadamente demostrado por demasiados ejemplos, que nunca una Potencia colonial había tratado de preparar a un pueblo colonizado para que ejerciera su responsabilidad nacional sino que, por el contrario, había orientado toda su política para mantenerlo en un estado social y cultural atrasado, a fin de perpetuar indefinidamente su explotación. Las dificultades que encontraban los pueblos recién liberados se debían pues, en primer lugar, a las Potencias coloniales que, con harta frecuencia, las aprovechaban para mantener su dominación política y sus privilegios económicos. El logro de la independencia no constituía el fin de la explotación colonial, sino su reaparición en formas nuevas no menos condenables.

458. Por ello, la descolonización debía aplicarse también a ese aspecto de dominación colonial, que presentaba potencialmente los mismos peligros que la dominación directa y brutal. Para ser total, la descolonización debía preservar el patrimonio de los pueblos excoloniales y permitirles desarrollarse al amparo de toda coacción exterior.

459. Por supuesto, los países recién independizados debían en primer lugar percatarse de sus responsabilidades y hacer respetar su soberanía. Por ello, para oponerse a las manifestaciones del neocolonialismo, tendrían que empezar uniéndose sus esfuerzos y los medios de que disponían. Pero el hecho de que un país colonizado llegase a la independencia debía crear relaciones nuevas con el antiguo colonizador, cuya responsabilidad no podía caducar al terminar el régimen colonial. El establecimiento de esas nuevas relaciones, si éstas estaban desprovistas de toda voluntad oculta de dominación y orientadas hacia la construcción de un porvenir mejor, basado en una amistad sólida y duradera, podía contribuir a facilitar las transformaciones consecutivas a la desaparición de un sistema colonial y proporcionar a las relaciones entre los pueblos una base nueva y fecunda. Así, Argelia había iniciado sin complejos y con toda lucidez una cooperación con Francia, en el respeto mutuo de los intereses esenciales y de la soberanía de los países. Esa cooperación, que se había desarrollado a pesar de las dificultades de todo tipo y que, paulatinamente, se había ido adaptando a la realidad y a las aspiraciones de los dos pueblos, constituía una experiencia llena de enseñanzas por las relaciones que establecía no sólo entre un país que fue colonial y su antiguo colonizador, sino también entre un país subdesarrollado y un país desarrollado. Los esfuerzos que desplegaban ambas partes para perfeccionar el contenido de esta cooperación y vencer las dificultades con que naturalmente podía tropezar eran las mejores prendas de su éxito.

460. Esa experiencia demostraba que una cooperación de ese tipo, deseable por sí misma, llegaba a ser exaltante cuando las relaciones bilaterales se caracterizaban por una amistad y una estima recíprocas, cuan-

do se evaluaban razonablemente los intereses verdaderos de las dos partes y se imponía una determinación común de borrar y de superar todas las secuelas del pasado, para afianzar el presente y garantizar el porvenir. Una empresa tal obedecía a una visión auténticamente histórica de las cosas, porque se inspiraba en una adhesión sinceramente compartida a la libertad de los pueblos, a la fecundidad de las relaciones de cooperación que podían existir entre ellos y al afianzamiento de la paz y la estabilidad en el mundo. Así aparecería uno de los caminos más positivos de la descolonización.

461. La opinión internacional se había percatado de la importancia del problema de la descolonización y las instituciones internacionales habían obrado legítimamente al ocuparse en la cuestión y seguir su evolución. La presencia del Comité en África demostraba el interés cada día mayor de las Naciones Unidas por la descolonización y por las actividades de los movimientos de liberación.

462. Si el mantenimiento de la dominación colonial estaba en contradicción flagrante e inadmisible con los derechos de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, esa situación llevaba consigo graves peligros para el equilibrio internacional y para la paz del mundo.

463. Ciertamente era que las Naciones Unidas se preocupaban desde su creación por los problemas de la descolonización y el problema de la discriminación racial. En cada período de sesiones de la Asamblea General esos problemas eran objeto de múltiples intervenciones y originaban numerosas resoluciones; el propio Consejo de Seguridad se había ocupado repetidas veces en esas cuestiones; se habían creado organismos especiales para estudiar y seguir especialmente la evolución de esos problemas. Así resultaba evidente el deseo de la Organización de contribuir a llevar hasta el final la descolonización, y sus Estados Miembros habían condenado definitivamente la dominación colonial y la discriminación racial.

464. Sin embargo, por desgracia no podía afirmarse que los resultados conseguidos correspondían a las buenas intenciones manifestadas. Veinte años después de la creación de las Naciones Unidas, grandes territorios y numerosos pueblos seguían sometidos al yugo colonial; el régimen de apartheid seguía haciendo estragos en Sudáfrica y, lo que era peor, se extendía actualmente a Rhodesia del Sur. Ciertamente era que algunos países habían recuperado su independencia durante ese período y habían llegado a ocupar un puesto en la Organización; sus esfuerzos habían tendido constantemente a reforzar la acción de las Naciones Unidas en la esfera de la descolonización y en la lucha contra los regímenes de segregación racial. A pesar de esa energía aportada a la Organización, los resultados prácticos habían sido insignificantes, por no decir completamente nulos.

465. La conclusión lógica era que las Naciones Unidas deberían revisar su estructura y sus métodos de trabajo que, en su estado actual, las condenaban a la ineficacia y al inmovilismo. Era anormal e inadmisible que un país, por muy grande que fuese, pudiera desafiar a toda la Organización y oponerse a sus decisiones. En su concepto actual, la Organización permitía esa anomalía que constituía un desacato a su autoridad. Había llegado el momento de dar a la institución internacional suprema una estructura, más conforme con la imagen del mundo actual, que le permitiera asumir

la responsabilidad que le correspondía en el mantenimiento de buenas relaciones con todos los pueblos. Los países recién independizados deberían encontrar el lugar a que tenían derecho y desempeñar plenamente su papel. Por añadidura, parecía apropiado revalorizar las atribuciones y responsabilidades de la Asamblea General, a fin de establecer un equilibrio mejor entre ella y el Consejo de Seguridad. Por último, la Organización seguiría siendo imperfecta mientras no tuviese el carácter de universalidad que debería tener; no era posible seguir manteniendo fuera de las Naciones Unidas a un país tan importante como la República Popular de China, cuya población representaba la cuarta parte de la humanidad; también era hora de que los países que habían podido dudar de la utilidad y la eficacia de las Naciones Unidas volvieran a ocupar su lugar legítimo, porque los defectos y las imperfecciones que se acababan de subrayar no disminuían en absoluto la importancia del papel que desempeñaban las Naciones Unidas en mantener la paz en el mundo y en reforzar la cooperación entre los pueblos. Los fracasos, los errores y las lentitudes, no deberían hacernos olvidar todo lo que había realizado la Organización y los peligros que había sabido evitar. Argelia quería rendirle homenaje por esa labor perseverante y seguiría aportando su contribución a sus esfuerzos. En ese homenaje incluía al Secretario General U Thant que, con competencia y autoridad, había sabido orientar y dirigir sus actividades; homenaje tanto más sincero y cordial cuanto que Argelia no olvidaba el papel determinante que había desempeñado como Presidente del Comité de Solidaridad con Argelia cuando ésta libraba su lucha de liberación nacional. Era innegable que U Thant había sido uno de los hombres que más habían contribuido a dar a la Organización un sentido, una vitalidad y un dinamismo que la harían merecedora del respeto de todos.

466. Dijo, para concluir, que deseaba al Comité un éxito total en su labor, y le aseguró que el Gobierno de Argelia haría cuanto estuviese a su alcance para facilitar sus esfuerzos y ayudarlo en el desempeño de su misión.

Declaraciones generales

467. El Presidente del Comité Especial expresó su gratitud al Presidente de Argelia por su elocuente mensaje y al Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia por el importante discurso que había pronunciado en nombre del Presidente y del Gobierno de Argelia. Pidió al Ministro de Relaciones Exteriores que transmitiese al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Argelia la gratitud del Comité Especial por el honor que para el Comité representaba el haber sido invitado a celebrar sus debates en Argel, capital de una nación que no iba en zaga a ninguna en sus esfuerzos por liquidar el colonialismo y conseguir una auténtica independencia, objetivos que, irrevocablemente, también hacía suyos el Comité.

468. La historia de la valiente lucha de Argelia por la independencia había sido justamente aclamada como un ejemplo clásico y heroico de la búsqueda incesante de libertad por todos los países y pueblos coloniales. Para el Gobierno y el pueblo de Argelia era timbre de gloria inmarcesible el que, a pesar de los enormes sacrificios que habían tenido que hacer para conseguir su independencia, no hubiesen olvidado en el momento del triunfo a sus hermanos de África y del mundo árabe.

be que seguían combatiendo para conquistar sus legítimos derechos y aspiraciones. El Gobierno y el pueblo de Argelia, por sus hechos y por su ejemplo, habían respetado sus compromisos con todos los que en el mundo entero combatían por la libertad. Por este motivo, el Comité consideraba honra señalada el reunirse en Argel.

469. La presencia de las Naciones Unidas en África, y su labor en pro de la descolonización, ponían claramente de manifiesto la nueva orientación de las actividades de las Naciones Unidas en el decenio comenzado en 1960 y su participación cada día mayor en los problemas de la descolonización, de conformidad con las responsabilidades establecidas en la Carta y en respuesta al desafío de un mundo en el que, pese a las declaraciones piadosas de muchos Miembros de la Organización, seguía vivo todavía el terrible cáncer del colonialismo.

470. En el curso de sus reuniones en África, el Comité Especial había celebrado debates muy útiles en la República Unida de Tanzania, Somalia, Etiopía y la República Árabe Unida. Había examinado detenidamente la situación colonial en diversas partes del continente africano y del mundo árabe. En Argelia proseguiría su estudio de otros problemas coloniales que persistían en ese continente. El ambiente del país invitante, acogedor a la vez que anticolonialista, junto con la inspiración que recibía de todos los pueblos amantes de la paz, darían impulso a deliberaciones del Comité y contribuirían a que desempeñara su labor con eficacia y energía.

471. En nombre de todos los miembros del Comité y del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas, deseaba dar las gracias al Gobierno de Argelia por los espléndidos alojamientos y locales de trabajo que tan generosamente había puesto a su disposición. Expresó su satisfacción por la cordial hospitalidad que, en conformidad con las mejores tradiciones árabes y africanas, se había dado al Comité y que sin duda alguna contribuiría al éxito de sus trabajos.

472. El representante de Malí expresó, en nombre del pueblo de la República de Malí, de la Unión Sudanesa (RDA) y del Gobierno de Malí, su sincero agradecimiento al pueblo hermano y al Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, así como a los dirigentes del Frente de Liberación Nacional, partido de vanguardia que desde la independencia dirigía ese Estado hermano. Al pisar por primera vez el suelo argelino, todo maliense se sentía conmovido y orgulloso pues compartía los sentimientos del pueblo argelino en cuanto a la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Los lazos históricos que desde hacía varios siglos unían a los dos pueblos se habían fomentado con las corrientes comerciales, culturales y religiosas que habían atravesado el Sáhara en ambos sentidos; ese desierto no era un obstáculo sino, muy por el contrario, un vínculo.

473. Por otra parte, no se podía hablar de Argelia sin evocar la lucha gloriosa de este pueblo para poner fin a la dominación colonial y promover una política dinámica que colmara las aspiraciones reales del pueblo argelino. Si Malí había logrado fácilmente la independencia, lo debía sin duda al valor y la tenacidad del pueblo maliense, pero también al animoso sacrificio del valiente pueblo argelino. El orador se sentía emocionado al pensar en los millares de argelinos muertos en el campo del

honor para que África recuperase un día su independencia y su dignidad.

474. El representante de Malí estaba convencido de que África, una vez libre del yugo colonial, haría retroceder al hambre y la enfermedad y podría por fin desempeñar el papel histórico que le estaba destinado. Desgraciadamente, todavía existían allí focos de tensión, lugares donde el hombre explotaba al hombre y donde reinaba el apartheid, ese régimen atroz que no era sino una supervivencia de la esclavitud. El Comité Especial tenía el deber de desenmascarar la complicidad de las grandes Potencias que, al ayudar a los regímenes colonialistas, impedían que se aplicase la resolución 1514 (XV).

475. Añadió que el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, el Sr. Boutefflika, había recordado en la sesión precedente la gravedad de la situación en África. Las Naciones Unidas tenían la obligación moral de apoyar todos los movimientos nacionales de liberación, pues su lucha era justa y conforme a la Carta. Todos sabían, por otra parte, que librado a sí mismo Portugal no podría continuar su odiosa guerra de conquista. Quería rendir homenaje a los combatientes y asegurarles el apoyo incondicional del pueblo maliense.

476. Antes de concluir sus reuniones en África, el Comité Especial tenía el deber de aprobar una resolución general que condenara la política retrógrada de los gobiernos Salazar, Smith y Verwoerd, que condenara los monopolios financieros que los apoyaban, y que presentara recomendaciones enérgicas en ese sentido a la Asamblea General. Debería fijar asimismo una fecha límite para el logro de la independencia por los territorios bajo dominación portuguesa, en cumplimiento del mandato que suponía la resolución 2105 (XX), y recomendar al Consejo de Seguridad que diera carácter obligatorio a las sanciones económicas adoptadas respecto de Portugal. Sería necesario asimismo que recomendase que el Consejo de Seguridad impusiese a las Potencias administradoras la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas y el cese de la actividad de sus bases militares en el extranjero.

477. El representante de Malí se declaró dispuesto a continuar todo debate a este respecto y reiteró al Gobierno y al pueblo de Argelia la gratitud fraternal de su delegación.

478. El representante de Túnez agradeció al Sr. Boutefflika el elevado contenido moral de la alocución que había pronunciado. Estaba convencido de que ese discurso sería una valiosa fuente de inspiración para todas las delegaciones, y se unía al Presidente para agradecer calurosamente al Gobierno y al pueblo de Argelia su magnífica acogida. A continuación evocó emocionado los lazos ancestrales que siempre habían unido a Argelia y a Túnez, en los momentos de angustia tanto como en los de felicidad. El Comité Especial se regocijaba particularmente por hallarse en Argelia, país hermano cuya valiente lucha contra el colonialismo nunca dejaría de constituir un ejemplo y un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Durante ocho años, los hombres, las mujeres y los niños de Argelia habían soportado sufrimientos y sostenido una prolongada resistencia bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional. Desde el comienzo, Túnez había considerado esa lucha como propia, pues, del mismo modo que Argelia, se había comprometido a no restar nunca su apoyo a los pueblos sinceramente animados por el deseo sagrado de libertad. Ese derecho inalienable a la

independencia estaba garantizado, por otra parte, en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

479. Recordó que con motivo del Congreso del *neo-destour*, reunido en Sousse en 1959, el Presidente Bourguiba había sugerido a las Potencias administradoras que se reuniesen en mesa redonda para decidir por sí mismas las modalidades de la liberación de los pueblos que administraban. Las Potencias administradoras no habían respondido a esa sugerencia, pero las Naciones Unidas sí lo hicieron aprobando la resolución 1514 (XV). Aprovechó la oportunidad para expresar la honda satisfacción que sentía su delegación por la forma en que el Comité Especial había cumplido su noble misión.

480. En esa reunión los miembros del Comité Especial habían de ocuparse en la cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa que, por su población y su superficie total, representaban casi una cuarta parte del continente africano. Era muy natural que ese grave problema se tratase en Argel, ciudad ejemplar en que los combatientes de la libertad encontraban aliento y una fuente siempre renovada de inspiración.

481. El representante de Túnez concluyó afirmando que ya nada podría detener la marcha de África hacia el progreso. La familia de los países independientes de África aumentaba de día en día y en breve el continente africano entero sería independiente.

482. Terminó agradeciendo nuevamente al Gobierno y al pueblo hermano de Argelia su cordial acogida.

483. El representante del Irak expresó la gratitud de su delegación al Gobierno y al pueblo de Argelia por la bienvenida que habían brindado al Comité. Era adecuado elegir para las deliberaciones del Comité a Argelia que, con la admiración del mundo entero, había luchado tan valientemente contra el colonialismo. El sacrificio hecho por su pueblo para recuperar la libertad constituía un ejemplo para todos los que todavía sufrían el yugo de la dominación extranjera. Además, Argelia desempeñaba una función muy importante en la Organización de la Unidad Africana, en la Liga de los Estados Arabes y en el mundo no alineado, y no escatimaba esfuerzo alguno en la causa por la paz, la libertad y la dignidad humana.

484. La delegación del Irak confiaba en que las reuniones del Comité en Argel tendrían el mismo éxito que las celebradas en otras capitales africanas. El Comité había aprobado, y habría de aprobar, importantes resoluciones encaminadas a la concesión pacífica de la independencia a los países y pueblos coloniales. Sin embargo, cuando las fuerzas del colonialismo hacían caso omiso de la opinión del Comité, los pueblos oprimidos, que buscaban apoyo moral en el Comité, no tenían otro recurso que luchar por su libertad. Como resultado del colonialismo, se habían planteado en muchas partes del mundo situaciones críticas: por ejemplo, en las colonias portuguesas, Rhodesia del Sur, Arabia Meridional y Omán. Además, como había subrayado acertadamente el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, estaba también la tragedia de Palestina.

485. La colaboración que habían prestado el pueblo y el Gobierno argelinos al Comité durante sus reuniones en Argel le daría nuevo ímpetu y le permitiría justificar la fe depositada por millones de seres humanos en las Naciones Unidas.

486. El representante de Polonia expresó al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Argelia su gratitud por la invitación formulada al Comité de celebrar las últimas reuniones de su período africano de sesiones en Argel. La delegación de Polonia se había sentido profundamente conmovida por la bienvenida brindada al Comité, y agradecía el inspirador mensaje con que el Presidente había hecho honor al Comité, así como el discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores. Estos mensajes, y la invitación al Comité de reunirse en Argel, eran una expresión de la importancia que atribuía Argelia a los elevados principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El Comité tenía el privilegio de reunirse en un país que se había convertido en símbolo de la heroica lucha de los pueblos por la libertad y la independencia. A raíz de la visita del Comité a Argelia, había podido por fin convertir en realidad un sueño largamente acariciado y rendir personalmente tributo al valeroso pueblo que había luchado, y dado su vida por la liberación de su país. La lucha del pueblo argelino, dirigida por el Frente de Liberación Nacional, había causado admiración en todo el mundo. El pueblo de Polonia había sabido que se trataba de una causa justa, que no sólo tendía a la liberación de Argelia, sino que también allanaría el camino para la independencia de muchos otros países africanos. El pueblo argelino y sus líderes también eran dignos de felicitación por sus notables éxitos en otros terrenos, por sus inagotables esfuerzos por la causa de la paz y del progreso, y por su destacada contribución a la erradicación del colonialismo en África y en otras partes del mundo.

487. Al expresar los mejores deseos de su Gobierno al pueblo y al Gobierno argelinos para el porvenir, manifestó que su delegación se sentía particularmente complacida por la visita a Argelia, país con el que Polonia desarrolla una fecunda colaboración.

488. El Comité había llegado a la última etapa de sus deliberaciones en África, y cabía esperar que sus debates en Argel alentarían a los que luchaban por la libertad en Angola, Mozambique, la Guinea Portuguesa y los demás territorios que habrían de examinarse. En esa etapa deseaba reiterar la posición de su delegación respecto del colonialismo, en beneficio de los peticionarios que habrían de presentarse ante el Comité. Al asegurarles el apoyo de su Gobierno en favor de la libre determinación y la independencia de todos los países que todavía estaban bajo el dominio colonial, dijo que Polonia, por su tradición histórica y su estructura social, se oponía totalmente a cualquier forma de opresión nacional o racial. Consideraba que la liberación de los pueblos coloniales era un acto de justicia histórica y estimaba que, mientras existiera colonialismo, no podría haber paz verdadera en el mundo. La delegación de Polonia siempre había condenado las brutalidades cometidas por los colonialistas, brutalidades que estaban en contradicción directa con la declarada misión civilizadora de los colonialistas en los territorios pertinentes. En Rhodesia del Sur y en el África Sudoccidental estaban perpetrándose crímenes contra la humanidad y, como había revelado el testimonio de los peticionarios de Angola y Mozambique, Portugal estaba intensificando su guerra de exterminio contra la población africana. Por el hecho de recibir ayuda económica, militar y política de ciertas Potencias de la OTAN, Portugal estaba en condiciones de burlar las

resoluciones de las Naciones Unidas, y esas Potencias eran culpables de los acontecimientos ocurridos en los territorios portugueses de África. Esas Potencias tenían intereses económicos y financieros profundamente arraigados en esos territorios, y estaban decididas a contener los movimientos de liberación nacional. La perpetuación del apartheid y la dominación colonial garantizaban inmensos beneficios al Reino Unido, los Estados Unidos y a Alemania occidental, obtenidos con mano de obra migrante barata. Sin embargo, su desafiante actitud tendría que cambiar radicalmente. Polonia, que había sido la primera víctima del nazismo y de su credo de la raza superior, consideraba que el colonialismo y el racismo constituían no sólo una afrenta a la dignidad humana sino también una amenaza a la paz mundial. Por consiguiente, no cesaría de elevar su voz en apoyo de los movimientos de liberación nacional y continuaría denunciando a los colonialistas como enemigos de la paz y de la cooperación internacional. Había llegado el momento de que el Comité adoptara medidas para eliminar un peligro tal que no perdonaría a Potencia alguna, fuese grande o pequeña. Por esa razón, el Gobierno de Polonia apoyaba incondicionalmente la erradicación total del colonialismo y del racismo.

489. El representante de la India agradeció al Presidente, al pueblo y al Gobierno de Argelia su hospitalidad. Argelia había sido una elección acertada como último lugar para celebrar las reuniones del Comité en África, dado que en la lucha contra el colonialismo se habían perdido más de 2 millones de vidas de ese pueblo. Los mensajes del Presidente del Consejo Revolucionario y el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia al Comité, en los que habían subrayado la indole urgente de los diferentes problemas y habían señalado la gravedad de la situación en territorios como Rhodesia del Sur y las colonias portuguesas, constituirían una importante contribución a los trabajos del Comité.

490. La lucha de la India contra el colonialismo era bien conocida en todo el mundo, y los nombres de Gandhi y Nehru quedarían consagrados para siempre en el corazón de todos los que amaban la libertad. La India había sostenido siempre que su propia independencia sería incompleta mientras otros países de Asia y África permanecieran esclavizados, pues la libertad era única e indivisible para todos los pueblos. En consecuencia, la India se unía a todos los que luchaban contra las horribles fuerzas del colonialismo en África.

491. Pese al hecho de que muchos de los países más poderosos habían terminado por comprender que el colonialismo no podía perdurar, Portugal seguía aferrándose a su inhumana dominación de ciertos territorios africanos. Continuaba viviendo en una época que ya pertenecía al pasado, y había perpetuado despiadadamente su dominio sobre la población africana con ayuda de sus aliados. Caba deplorar que después de cientos de años de la llamada misión cristiana civilizadora, apenas el 3% o el 4% de la población de los territorios portugueses supiera leer y escribir.

492. Aunque el Comité no podía impedir materialmente a los portugueses su implacable dominación en los territorios africanos, podía hablar y desenmascarar a Portugal y a sus aliados por su reprochable acción. La delegación de la India apoyaría a todos los que se comprometieran a desenmascarar al colonialismo. Si la dignidad y la libertad humanas habían de tener algún sentido, tenían que ser únicas e indivisibles para toda la humanidad.

493. Para concluir, la delegación de la India expresó al Gobierno y al pueblo de Argelia sus mejores deseos de bienestar y prosperidad para lo futuro.

494. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó la gratitud de su delegación al Gobierno y al pueblo de Argelia por haber invitado al Comité Especial a celebrar algunas de sus reuniones en Argel.

495. La cálida acogida brindada al Comité a pesar de lo tardío de su llegada formaba parte de una tradición invariable entre los argelinos. Era sumamente conmovedor que el Comité se reuniera en Argelia apenas cuatro años después de que el país se liberara de las ambiciones del colonialismo. Nunca en el siglo XX había pagado un pueblo precio tan alto por su libertad. En realidad, ello debería servir de lección a las Potencias coloniales en el sentido de que las justas causas triunfaban siempre. El progreso de Argelia desde su independencia constituía una lección más. Los éxitos alcanzados por el país demostraban lo que se podía realizar en un ambiente de libertad e independencia.

496. Era lógico que el Comité debatiera la cuestión de las colonias portuguesas en África. Portugal se negaba a aprender las lecciones de la historia, pero los que luchan por la libertad de esas colonias podían inspirarse en el éxito obtenido por Argelia. Tanzania estaría siempre al lado de las fuerzas de la libertad; mientras subsistiera el cáncer del colonialismo y del apartheid no podía haber libertad verdadera ni paz perdurable. Por consiguiente, el Comité no sólo estaba desempeñando una misión sino también cumpliendo su deber de eliminar el colonialismo.

497. El orador agradecía el mensaje alentador del Presidente del Consejo Revolucionario y el inspirador discurso del Ministro de Relaciones Exteriores. A medida que el viaje del Comité se aproximaba a su fin, la delegación de la India estaba más convencida que nunca de la decisión de los africanos de desarraigar el colonialismo de su continente.

498. El representante de Yugoslavia hizo suya la declaración del Presidente y agradeció al Gobierno y al pueblo de Argelia su cálida acogida. La delegación de Yugoslavia se complacía de estar en Argelia, país cuya lucha por la independencia había servido de inspiración a los movimientos de liberación del resto de África. Como el país continuaba desempeñando una importante función al respecto, varios movimientos africanos de liberación habían establecido su sede en Argelia.

499. El inspirador mensaje del Presidente del Consejo Revolucionario y la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores daban nuevo impulso a los trabajos del Comité. La colaboración y la amistad entre Argelia y Yugoslavia se remontaban a la época de la lucha argelina por la independencia y se mantenían a base del principio de no alineación y paz.

500. El orador terminó dando las gracias por la hospitalidad brindada al Comité y por los excelentes servicios y disposiciones previstos para sus trabajos, y augurando al pueblo argelino el mayor éxito, prosperidad y progreso.

501. El representante de Afganistán se asoció al Presidente para dar las gracias al Presidente del Consejo Revolucionario por su inspirador mensaje, y al Ministro de Relaciones Exteriores por su importante discurso y sus amables palabras de bienvenida. También

expresó gratitud al Gobierno y al pueblo de Argelia por haber invitado al Comité a celebrar algunas de sus reuniones en Argelia.

502. La cálida acogida que se había dado al Comité era un testimonio más de la hospitalidad tradicional de los argelinos, en cuyo país el colonialismo había sufrido una de sus mayores derrotas. Después de obtener su independencia, Argelia estaba desempeñando un papel importante en la descolonización.

503. Afganistán y Argelia estaban unidos por aspiraciones comunes y vínculos espirituales. Cuando los heroicos sacrificios de Argelia culminaron en la independencia, el júbilo de Afganistán había sido inmenso. El orador expresó los sinceros deseos de su país por la felicidad, prosperidad y progreso del pueblo argelino.

504. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó la viva gratitud de la delegación soviética al Presidente del Consejo Revolucionario, al Gobierno y al pueblo de la República Argelina Democrática y Popular por su invitación y su cordialísima hospitalidad. Las reuniones del Comité Especial en Argel habrían de ser sin duda fuente de inspiración para todos aquellos que buscaban la liquidación total de los regímenes coloniales, pues la lucha heroica del pueblo argelino contra la opresión extranjera serviría siempre de ejemplo para quienes luchaban por la libertad.

505. La República Argelina Democrática y Popular se encontraba en la vanguardia de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo; la lucha que libraba Argelia junto con los Estados hermanos y la Organización de la Unidad Africana, por la liquidación definitiva del colonialismo, era digna de la admiración y la gratitud de todos los pueblos amantes de la paz.

506. El orador se complacía muy especialmente de estar en Argelia, pues las relaciones de la Unión Soviética con ese país habían sido siempre fraternales. Esas relaciones habían comenzado en el momento en que el pueblo argelino empezó a resistir la opresión. Desde su llegada la víspera, el representante de la Unión Soviética había sentido los efectos de esta amistad. La Unión Soviética y Argelia tenían un ideal común: la construcción del socialismo y de una vida nueva.

507. El mensaje que el Presidente del Consejo Revolucionario había hecho transmitir a los miembros del Comité Especial constituiría para éstos una fuente de inspiración, pues alentaba a todos los que luchaban por su independencia. La alocución del Sr. Boutefflika revestía también sumo interés. Dijo que se felicitaba por la posición adoptada por el Gobierno argelino respecto de los problemas del colonialismo y de gran número de problemas internacionales, y que compartía plenamente la opinión del Gobierno argelino en cuanto a las acciones del imperialismo norteamericano en Viet-Nam.

508. Añadió que su delegación, por su parte, haría todo lo que pudiera para asegurar la aplicación de la resolución 1514 (XV). En el momento oportuno expondría detalladamente su posición sobre los problemas relativos a la liquidación de las colonias portuguesas y españolas. Por otra parte, deseaba asegurar inmediatamente a los pueblos de dichas regiones que contaban con la simpatía y los sentimientos fraternales de la Unión Soviética, que había ayudado y ayudaría siempre en lo porvenir a los Estados independientes de

Africa y a la OUA en su noble lucha contra el colonialismo y el imperialismo.

509. Declaró que se debería obligar a las Potencias coloniales a respetar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. La tarea era ardua, pues estos regímenes criminales contaban con la ayuda de las Potencias coloniales imperialistas y colonialistas occidentales. El imperialismo presentaba un frente unido. Era conveniente unirse contra aquellos que deseaban oponer obstáculos al proceso irreversible de la liberación de los pueblos. Los pueblos amantes de la paz deberían presentar también un frente unido contra ellos. El Comité Especial debería utilizar el derecho que se le confiriera en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General de informar sobre todos los acontecimientos nuevos que constituían una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. En conformidad con el Capítulo VII de la Carta, debería recomendar que se adoptaran medidas contra Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Había que adoptar decisiones que justificaran las esperanzas de los pueblos oprimidos de Africa. Concluyó expresando el deseo de que Argelia alcanzara el mayor éxito en la senda que se abría ante ella.

510. El representante de la Costa de Marfil consideraba un honor y un agradable deber asociar a su delegación a los sinceros agradecimientos que acababan de expresarse al Gobierno y al pueblo de la República de Argelia por su amable invitación y por la recepción fraternal y cálida que habían brindado a los miembros del Comité Especial. Esta invitación a Argel, última etapa de su viaje de información en Africa, permitiría al Comité establecer lazos del mismo modo que en Dar es Salaam, Mogadiscio, Addis Abeba y El Cairo, con los combatientes de la libertad que luchaban para liberar a sus territorios respectivos de la dominación colonial, del apartheid y de regímenes vergonzosos como el régimen rebelde de Ian Smith. La paz era indivisible y los derechos de todos los pueblos eran universales. Por esa razón, el representante de la Costa de Marfil deploraba que, diecinueve años después de la Declaración de Derechos Humanos, millones de seres estuvieran todavía privados de sus derechos inalienables. Esta situación creaba focos de tirantez que constituían una constante amenaza para la paz internacional. El representante de la Costa de Marfil hacía un nuevo llamamiento a la razón y al sentido común de los hombres y de los regímenes responsables de esta situación anacrónica. Había caducado la época de la explotación del hombre por el hombre.

511. El Comité Especial estaba encargado de aplicar la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Debía tener en cuenta el contexto internacional al que aludiera en su discurso el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia en la sesión anterior, y concentrar sus esfuerzos a favor de los pueblos respecto de los cuales tenía el mandato de ayudar a alcanzar la independencia. Su viaje a Africa debería interpretarse como una nueva manifestación de los vínculos de solidaridad que unían las Naciones Unidas a todos los pueblos africanos todavía privados de su derecho inalienable a la libertad y a la independencia y víctimas de la discriminación racial.

512. El orador agradecía mucho al Presidente del Consejo Revolucionario, Jefe del Gobierno de Argelia, país que ya había hecho tanto para ayudar a resolver el problema de la descolonización, su mensaje pleno de

sabiduría y de comprensión a los miembros del Comité. Agradecía asimismo al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina su declaración precisa y plena de enseñanzas. Estos dos hombres de Estado se daban perfecta cuenta de la pesada carga que había asumido su país al acoger en su suelo a los movimientos de liberación de los países sometidos a la dominación colonial. Dijo que quería asimismo rendir merecido homenaje al valiente pueblo de Argelia, que tanto había luchado por su independencia, y se felicitaba de que durante la permanencia del Comité en Argel participara en sus trabajos una delegación argelina. El Comité encontraría útil inspiración en el mensaje del Presidente del Consejo Revolucionario y en las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia. Le complacía comprobar que, pese a la modestia de sus medios, el pueblo argelino hubiese sabido alcanzar meritorios progresos desde su independencia, y expresó augurios de paz y de prosperidad al Gobierno y al pueblo argelinos.

513. El representante de Venezuela manifestó que el Comité no podría desear mejor sitio que Argel para terminar sus trabajos en Africa. Argelia era efectivamente un ejemplo vivo de lo que podía hacer un pueblo animado por la voluntad encarnizada de conquistar su independencia y de recobrar su libertad soberana. Su lucha heroica recordaba en muchas cosas la de los pueblos de América Latina en general y la de Venezuela en particular. Igual que el pueblo venezolano, Argelia no se había contentado con obtener su independencia. Desde que la recuperó, como miembro de la comunidad internacional, estaba desarrollando una acción de importancia capital en las Naciones Unidas, donde había adoptado una posición inequívoca de lucha contra el colonialismo y de ayuda a los pueblos que combatían por su independencia en Africa. Se declaró seguro de que el pueblo argelino, que no había vacilado en sacrificar la vida de más de un millón de sus hijos para conquistar su independencia, no daría por terminada su lucha sino cuando los millones de africanos que sufrían bajo el yugo colonial hubieran recobrado su dignidad de pueblos libres al mismo tiempo que su independencia. El mensaje que el Presidente del Consejo Revolucionario, Jefe de Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, había dirigido esa misma mañana al Comité Especial, daba prueba de ello. En su interesante alocución, el Sr. Abdelaziz Bouteflika, Ministro argelino de Relaciones Exteriores, había vuelto a ocuparse en la misma idea. La delegación de Venezuela unía su voz a la del Presidente del Comité Especial para dar las gracias a estas dos altas personalidades; las palabras que habían pronunciado serían fuente de inspiración para todos los miembros del Comité. El pueblo venezolano había seguido paso a paso la lucha heroica del pueblo argelino, al que la delegación de Venezuela se había impuesto la obligación de defender en todas las circunstancias con sus discursos y con sus votos. Dijo que se sentía feliz y orgulloso de poder expresar allí, en el propio suelo argelino, su admiración y su respeto por un pueblo que, lejos de dejarse intimidar por el opresor, había librado un combate encarnizado para reconquistar su libertad y su independencia.

514. No era mera casualidad que el Comité de los Veinticuatro celebrara en aquel momento sus reuniones en Argelia. Su viaje por el continente africano habría sido incompleto si no hubiera incluido una visita a ese santuario del anticolonialismo. Tampoco era casualidad

que el Gobierno argelino le hubiese invitado. El Comité tenía que ver este país que tanto había sufrido y tanto había luchado contra el colonialismo. Esta invitación le había permitido, no sólo ponerse en contacto con la realidad colonial en Africa, sino también conocer al noble pueblo argelino, que era a sus ojos el vivo símbolo del anticolonialismo en nuestra época.

515. Argelia, libre ya, había emprendido una nueva lucha contra la ignorancia y el subdesarrollo. Añadió que le había impresionado la juventud del país. Las calles estaban llenas de niños y de jóvenes que iban a la escuela o al instituto de segunda enseñanza. Argelia libraba una lucha implacable contra el analfabetismo, para combatir una de las secuelas más importantes del colonialismo: la ignorancia. En nombre de su delegación, el orador agradecía al Gobierno y al pueblo argelinos la cordialidad de su invitación y la generosidad de su hospitalidad. Los trabajos del Comité no podrían concluirse en un ambiente más propicio, y el orador tenía la certeza de que serían fructíferos. Hizo votos porque el admirable pueblo argelino conociera un porvenir mejor y le deseó pleno éxito en todas sus empresas.

516. El representante de Siria dijo que el hecho de que las sesiones finales del Comité se celebraran en Argel probaba la conciencia que tenía Argelia del supremo papel que estaba llamada a desempeñar en pro de la causa de la emancipación en todas partes, y de su resolución de llevarla a feliz término.

517. En defensa de la libertad, del derecho a la libre determinación y de la emancipación del colonialismo, ese país había sacrificado un millón de mártires y había librado una de las luchas más heroicas de la historia de la humanidad. Frente a su oposición, el mito de la asimilación colonial se había desmoronado y desde ese país, con la solidaridad africana, el apoyo asiático y la cooperación de las naciones amantes de la justicia, se daría el tiro de gracia contra los últimos enclaves que quedaban del colonialismo. Por ello era significativo que la grave situación de Angola constituyera el tema principal que el Comité iba a examinar en Argel.

518. Con abnegación total y dedicación universal, Argelia no se había contentado con su propio triunfo, sino que continuaba desempeñando su papel en los esfuerzos por resolver los problemas internacionales en general y en apoyar la causa de la liberación. La brillante declaración de su Ministro de Relaciones Exteriores había descrito claramente la amplia perspectiva de su actuación en los asuntos internacionales en general y sobre todo en la lucha contra lo que quedaba del colonialismo, un ejemplo flagrante del cual, y en una nueva forma, estaba prosperando en detrimento y miseria del pueblo árabe de Palestina.

519. La gran revolución argelina no se había detenido una vez desarraigada la presencia física del colonialismo. Había sido una revolución estructural dedicada a restituir al hombre su valor, desarrollar sus recursos, hacer de su bienestar el centro de las iniciativas, resucitar su verdadera cultura y realzar su contribución a la civilización, dentro del marco de relaciones humanas basadas en la justicia y en la igualdad sociales. En último término, pero no menos importante, esa revolución se había dedicado a alentar la tendencia legítima de las fuerzas progresivas hacia la solidaridad y hacia la comunidad de intereses, objetivos y aspiraciones. Había sido una auténtica revolución contra el concepto de amo y esclavo, de ciudadano de pri-

mera y de segunda clase, de privilegiados y parias. Por eso la revolución argelina se relacionaba de manera sumamente íntima con los propósitos del Comité en su labor de contribuir a la aplicación de la concesión de la independencia a pueblos inocentes que llevaban mucho tiempo sufriendo los tratos coloniales inhumanos, así como también con los objetivos de paz y justicia internacionales de las Naciones Unidas.

520. El valeroso pueblo de Argelia era fuente de inspiración para sus hermanos árabes de Siria, y el modelo que habían ofrecido era la personificación de todo lo que la humanidad tenía por noble. Expresó la sincera gratitud de su país al pueblo argelino, a su Gobierno y al Presidente del Consejo Revolucionario.

521. El representante de Italia hizo suyo el agradecimiento expresado por el Presidente del Comité al Presidente del Consejo Revolucionario y al Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia. La delegación de Italia expresaba su gratitud al Gobierno y al pueblo de Argelia por invitar al Comité a celebrar sus sesiones finales en Argelia. Entre los dos países los lazos eran tan estrechos y las distancias tan cortas que los italianos no tenían sensación de estar en el extranjero cuando iban a Argelia. Sentía de veras la mayor alegría por encontrarse allí y esperaba que su visita le proporcionara un conocimiento más íntimo del progreso realizado por el país desde su independencia.

522. El Comité tenía que reafirmar su promesa de fomentar el proceso de la descolonización por medios pacíficos. Todos deberían adherirse a ese principio, por razones morales y también por ser requisito previo de la cooperación internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La invitación que había recibido el Comité era símbolo de la confianza que tenía Argelia en las Naciones Unidas, y el Comité manifestaba su gratitud por ella.

523. Expresó también la profunda admiración de su delegación por los triunfos pasados y presentes de Argelia, y formuló sus más fervientes votos por la prosperidad y bienestar ulteriores del país.

524. El representante de Madagascar expresó la gratitud de la delegación de su país al Gobierno argelino, que había invitado al Comité Especial a celebrar la última parte de su período de sesiones en la maravillosa ciudad de Argel.

525. Dijo que la misión que el Comité desempeñaba en suelo argelino revestía una importancia particularísima para su delegación. Efectivamente, las peripecias de la historia habían hecho que Argelia y Madagascar conocieran un mismo amo y unas mismas tribulaciones. El pasado colonial de Madagascar estaba vinculado al de los países del Maghreb en general y al de Argelia en particular; si Mohamed V, Sultán de Marruecos, había estado desterrado en territorio malgache, la Reina de Madagascar, Ranaivalona III, había pasado el final de su vida de destierro en Argel.

526. Como tantos otros países, Madagascar aspiraba a la paz y deseaba una cooperación constante entre los miembros de la comunidad internacional, pero su Gobierno estaba convencido de que la concordia entre los miembros de esta comunidad descansaría en bases frágiles y precarias mientras un Estado abrigase la ambición de explotar a un pueblo extranjero, y mientras cualquier gobierno se obstinase en negar a un pueblo subyugado el derecho a disponer de sí mismo. El advenimiento de un gran número de países africanos a la

independencia y la conciencia que tenían de su responsabilidad para con sus hermanos todavía oprimidos deberían hacer comprender a los que aún sentían afecto por la idea de dominación y de explotación que estaban tratando de nadar contra la corriente. Las ideas de libertad y de independencia habían arraigado con tal fuerza en África que esos gobiernos obstinados se verían obligados a escuchar la voz de la razón y a aceptar su derrota.

527. El caso del pueblo argelino servía de ejemplo en los anales de la historia del triunfo de esas ideas sobre las armas. Era posible exterminar a una nación entera, pero nunca se conseguía por la fuerza sofocar las verdaderas aspiraciones de un pueblo, ya que siempre habría otros que compartirían sus ideales más allá de las fronteras. Madagascar había recuperado su soberanía y se percataba de la responsabilidad que le cabía para con los pueblos todavía sometidos a una dominación extranjera. La delegación malgache se sentía por eso profundamente agradecida al Gobierno argelino por la hospitalidad generosa que éste ofrecía al Comité Especial y que una vez más permitiría a sus miembros tratar con hombres que aún vivían bajo el yugo colonial, reunir información directa sobre la situación de los territorios coloniales que aspiraban a su liberación, obtener conclusiones prácticas de esos informes y alcanzar mejores resultados.

528. La representante de los Estados Unidos de América dio las gracias al Gobierno y pueblo de Argelia por su hospitalidad y su bienvenida.

529. Lamentaba tener que hacer constar que su delegación se sentía ofendida por ciertas observaciones hechas por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia y por el representante de la Unión Soviética, a quienes había parecido conveniente traer a colación y tergiversar un asunto ajeno a la competencia del Comité.

530. Se sentía sin embargo muy feliz de encontrarse en un país que, desde las primeras colonias de Cartago, el paso del Islam y el contacto con el Cristianismo, desempeñaba un papel prominente en la historia. Le complacía recordar que Argelia y los Estados Unidos siempre habían mantenido relaciones diplomáticas o consulares. Añadió que agradaba a su delegación contemplar la aparición de una nueva Argelia que miraba al porvenir llena de confianza, y le deseaba toda clase de éxitos en su ardua labor.

531. El representante de Etiopía se sumó a los que habían dado las gracias al Gobierno y pueblo de Argelia por la hospitalidad y cálida bienvenida dispensadas al Comité. La heroica lucha del pueblo argelino contra el colonialismo y el imperialismo perduraría como un jalón en los anales del continente y serviría de ejemplo e inspiración a todos los que luchaban por la libertad y la independencia.

532. Era de gran significado la presencia del Comité en la valerosa ciudad de Argel, cuyo mero nombre se había transformado en sinónimo de anticolonialismo. La cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa se había reservado, como correspondía, para ser debatida en ese lugar heroico donde la atmósfera militante y el entusiasmo revolucionario proporcionarían sin duda un marco adecuado para el examen de tan candente cuestión. Los sacrificios del pueblo de Argelia en defensa de la libertad y la independencia fortalecerían la resolución de los que estaban empeñados en una lucha a muerte contra la opresión portuguesa. Pro-

seguirían la lucha hasta el fin, sabiendo que sus esfuerzos serían coronados por el éxito y que sus sacrificios no serían vanos. La senda del heroísmo y sacrificio abierta por Argelia había marcado de manera indeleble a las masas luchadoras de Angola, Mozambique, Guinea Portuguesa y otras tierras. El Comité sentía gratitud para con el Gobierno y el pueblo de Argelia por haberle invitado y por haber permitido que la atención del mundo se concentrara en una cuestión tan fundamental.

533. Para Etiopía, la completa eliminación del colonialismo y el imperialismo de la tierra constituían un compromiso contraído y un objetivo nacional. La actitud fosilizada de Portugal, que tan obstinadamente se aferraba a sus colonias en Africa, no sólo constituía una afrenta a la opinión pública mundial, sino también un baldón para la civilización moderna. Etiopía no desearía hasta acabar con ese estigma.

534. Después de una dominación de varios siglos de duración, los colonialistas portugueses no tenían nada que mostrar para justificarse. Los trabajos forzados, la tortura y la opresión eran la característica de su misión civilizadora en Africa. A los habitantes de Angola, Mozambique y Guinea Portuguesa no les quedaba otro recurso que recurrir a las armas para recuperar su derecho a una existencia humana decorosa. En su lucha, por larga y encarnizada que fuese, tenían el pleno apoyo moral y material de la humanidad progresiva. A medida que la lucha se intensificara en el porvenir, la terquedad portuguesa tendría que desplomarse por su propio peso de crueldad y opresión.

535. Añadió que deseaba agradecer muy sinceramente al Presidente y al Ministro de Relaciones Exteriores sus inspirados mensajes, y asegurar al pueblo argelino que en sus esfuerzos en pro de la gran causa de la libertad y la independencia tenían en Etiopía un aliado fuerte y fiel, cuyos propósitos y objetivos son idénticos. También quería asegurar a todos los guerrilleros allí presentes que Etiopía, junto con toda la humanidad progresiva, no omitiría esfuerzo alguno por conseguir que la lucha por la justicia y la democracia se viera finalmente coronada por el éxito.

536. El representante de Chile expresó el reconocimiento muy sincero de la delegación chilena al Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular por la invitación que había enviado al Comité. Igual que la belleza de los paisajes de Argelia, la historia de la bravura del pueblo argelino era fuente de inspiración para todas las naciones que amaban la paz y deseaban ver triunfar la igualdad y la justicia en todas partes del mundo.

537. Argelia había dado el más bello ejemplo de liquidación total del colonialismo. El mundo entero había vivido minuto a minuto la lucha que su pueblo libró para pasar del estado de opresión al del libre ejercicio de sus derechos. El pueblo chileno siempre había defendido esa causa. Luchó sin descanso contra el sistema colonial. Siempre se percató de sus obligaciones para con el resto del mundo. Contribuyó con la plena medida de sus posibilidades a la liberación de los pueblos y de los territorios sometidos a dominación colonial, para permitirles ejercer con la mayor rapidez posible su derecho fundamental a la libre determinación y a decidir su propio porvenir.

538. Chile siempre experimentó una gran admiración por la nación argelina y siempre apoyó el mo-

vimiento de liberación, gracias al cual, al precio de tantos dolores y de tanta sangre derramada, pudo alcanzar la independencia de su territorio y de su pueblo. Para Chile la proclamación de la independencia de Argelia causó la sensación de un triunfo personal. Sus relaciones con Argelia siempre fueron cordiales y estrechas, como probó ampliamente concertando con ese país convenios bilaterales y actuando totalmente de acuerdo con él en el concierto de las naciones.

539. La delegación de Chile escuchó con mucho interés el mensaje del Presidente del Consejo Revolucionario Argelino y el excelente discurso pronunciado esa misma mañana por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular. Su delegación felicitaba cordialmente a esas dos personalidades por la manera brillante en que habían expresado el punto de vista de su Gobierno sobre la situación de los territorios sometidos todavía a la dominación colonial.

540. Igual que los demás Estados de la comunidad mundial, Argelia conocía bien la posición de Chile respecto a este tipo de dominación. Como miembro del Comité de los Veinticuatro, Chile había podido contribuir eficazmente a la lucha que se desarrollaba contra el colonialismo para asegurar a hombres que todavía eran extranjeros en su propio suelo el pleno ejercicio de sus derechos. Si todos los Estados actuaran de la misma forma y aplicaran los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, sería posible resolver el problema y superar un sistema que ya estaba caduco.

541. El representante de Chile terminó expresando una vez más la gratitud de su delegación al Gobierno y al pueblo argelinos por la cordialidad de su hospitalidad y la fraternal bienvenida que habían deparado a los miembros del Comité de los Veinticuatro.

542. El representante del Irán expresó el sincero agradecimiento de su delegación al Presidente del Consejo Revolucionario, al Gobierno y al pueblo de Argelia por su amable invitación al Comité para que celebrara sus sesiones finales en Argelia. Aun cuando el Comité había llegado a la etapa final de su viaje, su misión estaba todavía por cumplir. En el transcurso de sus reuniones en Africa se había sentido sumamente alentado por la fe que las gentes de todas partes depositaban en su labor. Entre el heroico pueblo de Argelia el Comité cobraría vigor y reforzaría su resolución de eliminar el imperialismo.

543. El pueblo argelino había conseguido su gran triunfo contra el colonialismo gracias a su valor, resolución sin flaquezas y fuerza de carácter. A los argelinos les cupo en suerte la sangre, sudor y fatiga, mientras que al Comité le incumbía una función de persuasión. Sin embargo, se podía decir sin riesgo de error que, a pesar de la gran superioridad con que se enfrentaba, triunfaría en la causa de la libertad y la independencia a condición de que nunca perdiera de vista el heroico ejemplo de Argelia. Al conseguir su propia independencia, ese país no había dejado de ser el paladín de la libertad y la justicia, sino que se había convertido en abanderado de todos los pueblos coloniales y no había regateado esfuerzo alguno en la lucha por la eliminación total del imperialismo en todas partes. Su independencia había marcado el comienzo de una nueva era y desde su primer día su Gobierno había emprendido una audaz política para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. El éxito había coro-

nado sus esfuerzos en la enseñanza, la lucha contra el analfabetismo, la industrialización y la mecanización de la agricultura y facilitaría una vida más rica para todos. El representante del Irán rindió homenaje a los mártires argelinos, cuyo sacrificio no había sido en vano. Dieron sus vidas para que sus hermanos y hermanas vivieran con libertad y justicia.

544. Al Comité Especial le beneficiarían grandemente las sabias e inspiradas palabras del Presidente del Consejo Revolucionario y del Ministro de Relaciones Exteriores. El representante del Irán expresó el agradecimiento de su país, que desde tiempos inmemoriales se mantenía unido a Argelia por lazos espirituales y culturales, por la cálida hospitalidad que se le había dado, y formuló sus mejores votos por el éxito y prosperidad del pueblo argelino.

545. El representante de Sierra Leona agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia sus estimulantes palabras sobre la responsabilidad del Comité en relación con el colonialismo y le aseguró que su delegación haría todo lo que estuviera a su alcance para contribuir a la búsqueda de una solución justa y rápida.

546. Las cuestiones de Rhodesia del Sur, África Sudoccidental y los Territorios bajo dominación portuguesa habían sido calificadas de casos crónicos de colonialismo. Las luchas armadas en esos Territorios evocaban la lucha que durante tanto tiempo libró el heroico pueblo de Argelia, y sin duda alguna esa lucha también tendría éxito. El Comité tenía la fortuna de encontrarse en Argelia para celebrar sus debates sobre esos Territorios, debates que infundirían nueva esperanza a los guerrilleros. Sus deliberaciones y recomendaciones volverían a encender la llama de la independencia que las Potencias coloniales habían tratado de extinguir.

547. La servidumbre del colonialismo dejaba tras de sí unos niveles económicos tan bajos que constituían una modalidad de opresión causante de una lesión duradera. Sin embargo, el ejemplo de Argelia daría fuerzas a sus hermanos que todavía esperaban la liberación.

548. El Comité recibió una cálida bienvenida del pueblo de Argelia. El representante de Sierra Leona tenía la convicción de que su permanencia sería agradable y de que su país y Argelia cobrarían continuamente nuevo vigor en su obra de buscar la paz, la justicia y la libertad en todas partes del mundo. Su delegación daba las gracias al Presidente del Consejo Revolucionario y al Gobierno y al pueblo por su afable invitación y generosa hospitalidad, y al Presidente y al Ministro de Relaciones Exteriores por sus alentadoras declaraciones. El Comité no descuidaría gestión alguna en su obra de combatir todas las formas del colonialismo.

549. El representante de Bulgaria expresa al Excelentísimo Sr. Houari Boumedienne, Presidente del Consejo Revolucionario y Jefe de Gobierno, así como a los otros miembros del Gobierno y al pueblo de la República Argelina Democrática y Popular, el más sincero agradecimiento de su delegación por el caluroso recibimiento que habían tributado al Comité de los Veinticuatro.

550. En esta última fase de sus trabajos, el Comité estaba en condiciones de apreciar plenamente la generosa hospitalidad de Argelia. Su trabajo no había sido en vano y su saldo, que ya era favorable, lo sería todavía más gracias a la acogida que había recibido.

551. La delegación búlgara acogía con agrado la presencia en la sala de la delegación argelina. Los miembros del Comité de los Veinticuatro, a quienes incumbía un papel especial en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, sabrían apreciar en su justo valor la cooperación de esa delegación. La participación activa en los trabajos del Comité de un país que se encontraba en primera fila en la lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo no podía menos de imprimir un nuevo impulso a la obra de descolonización del Comité. El emocionante mensaje del Presidente Boumedienne y el notable discurso del Sr. Boufelifka, Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, contenían ideas y sugerencias que permitirían acrecentar la eficacia de los trabajos del Comité y serían fuente de inspiración para todos. La delegación búlgara se sumaba plenamente a la solidaridad y a la simpatía que el Ministro argelino de Relaciones Exteriores había expresado de una manera emocionante al pueblo de Viet-Nam del Sur, empeñado en una lucha implacable contra la agresión imperialista de los Estados Unidos. La delegación búlgara siempre deseó ardientemente conocer de cerca al pueblo revolucionario de Argelia, que supo romper por sí solo sus cadenas coloniales y que escribió con sangre, al precio de la vida de cerca de dos millones de sus hijos, una de las páginas más gloriosas de la lucha armada contra el imperialismo, el colonialismo y la opresión del hombre por el hombre, y experimentaba una profunda emoción al encontrarse por primera vez en suelo argelino. La presencia del Comité en la hermosa ciudad de Argel, verdadera perla del Mediterráneo, adquiría profundo significado. El representante de Bulgaria tenía la certeza de que el Comité sabría desempeñar su misión, que no defraudaría al valiente pueblo argelino que tan generosamente le ofrecía hospitalidad, que se inspiraría en la lucha victoriosa librada por Argelia contra el colonialismo y que no regatearía esfuerzo alguno para contribuir, de acuerdo con las Naciones Unidas, a la liberación de los pueblos todavía colonizados.

552. Fiel a su política antiimperialista de Estado socialista, la República Popular de Bulgaria apoyaba sin reservas la lucha anticolonialista y los movimientos de liberación nacional de Rhodesia del Sur, del África Sudoccidental, de Sudáfrica, de Mozambique, de Angola, de la llamada Guinea Portuguesa, de Adén, de Omán y de otras partes, de la misma forma que se había puesto sin reservas del lado del pueblo argelino cuando éste luchaba heroicamente por su liberación. En esa ciudad impregnada de espíritu revolucionario y anticolonialista, la delegación búlgara deseaba reafirmar la solidaridad del pueblo búlgaro con los pueblos que sufrían todavía bajo el yugo colonial. Pedía al Presidente que transmitiera al valiente pueblo argelino y a su Gobierno los mejores votos del pueblo búlgaro por el éxito de su obra de edificación de una nueva sociedad fundada en la libertad y la justicia. Deseaba al pueblo de Argelia, con el que el pueblo búlgaro tenía vínculos de amistad y de cooperación, nuevos éxitos en su labor de afianzar el poder del pueblo y construir una Argelia popular y democrática.

553. El representante de Dinamarca dio sus más expresivas gracias al Gobierno de la República Argelina por haber invitado al Comité de los Veinticuatro a reunirse en Argelia. Se había sentido profundamente impresionado por la cordialidad de la acogida de los ar-

gelinos y por la hospitalidad tradicional del país y del pueblo. Era completamente natural que el Comité Especial se reuniera en la capital de un país cuya lucha por la independencia servía de ejemplo a los otros países que se encontraban bajo dominación colonial. La delegación danesa estaba convencida de que los trabajos del Comité se inspirarían en el espíritu de libertad que había presidido esta lucha. Se encontraba este espíritu de nuevo en el mensaje que el Presidente Boumedienne había tenido a bien dirigir al Comité y en el discurso sobre el problema colonial pronunciado por el Sr. Abdelaziz Bouteflika, Ministro argelino de Relaciones Exteriores. En particular, la delegación danesa había apreciado la confianza que Argelia depositaba en las Naciones Unidas, pues esta Organización podía y debía desempeñar un papel muy importante en el proceso de descolonización. El representante de Dinamarca había tomado nota con gran satisfacción de la declaración del Sr. Bouteflika acerca de las relaciones amistosas que se habían entablado después de la liberación entre Argelia y Francia, y que demostraban que las relaciones entre dominadores y dominados podían dar paso a relaciones fecundas fundadas en los principios de soberanía e igualdad.

554. La delegación danesa se congratulaba de que su Gobierno mantuviera excelentes relaciones con el de la República Argelina. Aprovechaba esa ocasión para transmitir al Presidente del Consejo Revolucionario, al Gobierno y al pueblo argelino de parte del Gobierno y del pueblo daneses los mejores votos por su felicidad, y les deseaba siguieran progresando por la vía que habían elegido.

555. El representante de Australia dijo que al llegar a Argelia su delegación se daba perfecta cuenta de encontrarse en medio de un pueblo que había sufrido mucho, que se había atrevido a mucho y que estaba logrando mucho. Era un honor encontrarse entre ellos, y había sido motivo de especial placer el ser saludado en su propio país por antiguos amigos y colegas de la misión de Argelia en las Naciones Unidas en Nueva York. Sus oficinas y las suyas eran adyacentes, y además de ser buenos vecinos se habían hecho excelentes amigos.

556. Su delegación presentaba sus mayores respetos al Presidente del Consejo Revolucionario y le daba sus más sinceras gracias a él y al pueblo de Argelia por su hospitalidad. El mensaje con el que había honrado al Comité sería transmitido fielmente a su Gobierno junto con el del Ministro de Relaciones Exteriores.

557. Durante la última etapa de su viaje por África, el Comité se había percatado más profundamente que nunca de la importancia del pueblo, que era el objeto de todos sus esfuerzos. En definitiva, sólo gracias a los esfuerzos comunes y a la comprensión común de la humanidad sería posible que sus derechos y sus esperanzas se realizaran y que sus temores se superaran. Para los pueblos libres de todas partes, el precio de la libertad era una vigilancia eterna para proteger sus derechos y para reconocer las formas variables y siniestras de la agresión contra ellos, de manera que todo hombre pudiera llegar a ser o seguir siendo el hombre libre que deseaba ser.

558. Expresó los más fervientes votos de su delegación a los dirigentes y al pueblo de ese país libre por el futuro que a tan alto precio habían pagado.

559. El representante de Argelia dijo que no era costumbre que un observador interviniera en los debates, pero deseaba responder en pocas palabras a los cálidos elogios que todas las delegaciones habían tenido para con su país. Si, como él hubiera deseado, el pueblo argelino entero hubiera podido escuchar las palabras de amistad, de admiración, de confianza y también de reconocimiento que le habían sido dirigidas, habría sido testigo del más hermoso homenaje rendido a su valor y a su heroico sacrificio, y se habría dado cuenta de que todos los miembros del Comité se percataban de la grandeza y de la resonancia de su lucha.

560. Habían sido demasiado numerosas las intervenciones de los miembros del Comité para que fuera posible responder a ellas individualmente. Por eso la delegación argelina, en nombre del Consejo Revolucionario, del Gobierno y del pueblo argelino en su totalidad, deseaba dar las gracias colectivamente a los miembros del Comité por el amistoso aprecio y los votos unánimes que habían tenido a bien expresar.

561. Al terminar una lucha difícil, Argelia trataba de volver a edificar sobre sus múltiples ruinas, consecuencias inevitables de su lucha encarnizada por la libertad, a fin de construir un Estado fuerte, soberano, digno de su milenario pasado y sin embargo capaz de desempeñar plenamente su papel en medio del concierto de las naciones. Nada tenía de incompatible esta ambición, sino todo lo contrario, con los principios en que se inspiraba el Comité. Fiel al lema de uno de los oradores: "Argel, santuario del anticolonialismo", Argelia se había dedicado a combatir las consecuencias del colonialismo, dondequiera que todavía subsistiesen.

562. El Gobierno argelino tenía por tanto el imperativo deber de colaborar con la máxima eficacia posible en todas las formas de la lucha anticolonial, y especialmente prestando ayuda directa e indirecta a los movimientos de liberación de su duro combate. Esa actitud tenía por consecuencia lógica la invitación hecha al Comité de los Veinticuatro, para que fuera a celebrar una parte de su período de sesiones en Argelia. El representante de Argelia se sentía muy feliz por la ocasión que así se les ofrecía a todos sus hermanos de lucha presentes en Argel de hacerse oír por el Comité, el cual adquiriría así conocimiento pleno de las condiciones de su combate. Se sentía también feliz de poder recibir a los miembros del Comité en un país cuya tradición de hospitalidad tan frecuentemente había sido elogiada y de poner a su disposición todas las facilidades de trabajo necesarias, así como todos los recursos turísticos de su joven patria. Reiteró su agradecimiento a los miembros del Comité por la calurosa amistad de que acababan de dar prueba hacia Argelia.

Clausura de las reuniones

Declaraciones generales

563. El observador de Checoslovaquia dijo que, aunque sólo fuera como observador, le había complacido tener oportunidad de asistir al período de sesiones celebrado en África. Estimaba que el Comité había cumplido una buena tarea y aprobado resoluciones eficaces sobre los Territorios examinados. El Gobierno de Checoslovaquia prestaría la debida atención a dichas resoluciones y apoyaría las recomendaciones del Comité en las deliberaciones de la Asamblea General. Haría todo lo posible, además, por la causa de la libertad e independencia de los países y pueblos coloniales.

564. Añadió que ciertas delegaciones habían expresado su preocupación por la posibilidad de que la participación de observadores en las deliberaciones del Comité demoraran las tareas de éste. Pero la mayoría de los miembros convendrían en que no había sido así y en que si había habido algún tropiezo durante las deliberaciones del Comité, el origen había sido completamente distinto.

565. Por último, dio las gracias al Comité por haberle permitido asistir a su período de sesiones en calidad de observador, así como a los Gobiernos que habían invitado al Comité a reunirse en la capital de sus respectivos países. Deseaba que el Comité tuviera todo el éxito posible en sus ulteriores trabajos por la libertad e independencia de los países y pueblos coloniales.

566. El representante del Secretario General, en nombre de la Secretaría y en el propio, dio las gracias al Gobierno y al pueblo argelino por su hospitalidad y por todos los medios que habían facilitado, y pidió a la delegación de Argelia que hiciera extensivo ese agradecimiento a todos los interesados. El Secretario General también le había pedido que expresara su profundo agradecimiento al Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia por sus amables palabras al hacer su discurso de apertura en el Comité.

567. También manifestó la gratitud de todos los miembros de la Secretaría por las gentilezas de que les habían hecho objeto el Presidente, el Vicepresidente, el Relator y los miembros del Comité.

568. El Presidente, en nombre del Comité Especial, manifestó su agradecimiento al Presidente y al Gobierno de Argelia por haber facilitado la celebración de las últimas sesiones del Comité en Argelia y al Gobierno y al pueblo de este país por su cordial acogida y hospitalidad. En particular se agradecían profundamente los medios facilitados para las sesiones del Comité.

569. El Comité celebraba el haber visitado Argelia, porque así había tenido la ocasión de consolidar relaciones, amistades y vínculos con el valiente pueblo argelino, cuya lucha había sido una verdadera fuente de inspiración para el Comité y había dado ímpetu a las tareas de éste. Argelia triunfó tras una lucha ardua y larga por su independencia, que por el desfavorable equilibrio de fuerzas en los órganos políticos de la Organización recibió escasa asistencia de las Naciones Unidas. Sin embargo, el éxito mismo de la lucha había dado impulso a un proceso que, hasta cierto punto, había rectificado ese equilibrio y conducido a la constitución del Comité Especial. El Comité también había podido apreciar la resuelta dedicación de Argelia a la causa de la emancipación de todos los países y pueblos coloniales, como lo demostraba el puesto de vanguardia que ocupaba entre los países que, con gran sacrificio, prestaban generosa ayuda moral y material a los movimientos de liberación nacional. También había advertido la adhesión del país a la causa de la verdadera libertad, la eliminación de todo vestigio de colonialismo en su régimen y sus progresos en la consolidación de la independencia tan duramente conquistada.

570. En la resolución sobre la Guinea Ecuatorial (A/AC.109/186), aprobada por el Comité en Argel, se expresaba satisfacción por la invitación española, que fue a la vez un buen augurio de la voluntad de colaborar con el Comité y un ejemplo digno de emu-

lación por otras Potencias coloniales. Sin embargo, cabía subrayar que esos sentimientos se fundaban en la esperanza de que la invitación condujera al cumplimiento rápido y completo de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Sólo entonces el gesto de España y la acción posterior del Comité habrían de considerarse una contribución constructiva. Respecto a la resolución sobre los Territorios bajo administración portuguesa (A/AC.109/187), el Comité había escuchado a varios peticionarios, cuyo testimonio equivalía a una acusación completa de la violación de los derechos humanos por el Gobierno de Portugal. La prueba evidente de las atrocidades cometidas por los portugueses contra niños y ancianos, en particular, había horrorizado y abrumado a los miembros del Comité. Pero las noticias sobre la lucha incesante de los nacionalistas por sacudir el yugo de los opresores daban aliento al Comité, que por ende se había enterado directamente de las aspiraciones, necesidades y dificultades de aquéllos. Basado en esos datos el Comité había tomado una resolución importante y de gran alcance, en que aparecían algunos elementos nuevos: preocupación ante la nueva agravación de la situación ya crítica causada por la rebelión de la minoría racista de Rhodesia del Sur; condenación de la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento de inmigrantes extranjeros y exportación de mano de obra africana a Sudáfrica; condenación de las actividades de los intereses financieros que operaban en los territorios, explotaban los recursos humanos y materiales y entorpecían el progreso hacia la libertad y la independencia; llamamiento a todos los Estados para que impidieran que sus nacionales cooperasen con las autoridades portuguesas sobre todo en la esfera de las inversiones extranjeras, y una firme recomendación al Consejo de Seguridad para que impusiera a todos los Estados la obligación de aplicar las medidas de la resolución 2107 (XX).

571. La decisión de hacer otra visita a África estaba más que justificada por los resultados conseguidos. Había vuelto a subrayarse la preocupación y solidaridad activa de las Naciones Unidas por los pueblos coloniales en general. La comunicación directa con los pueblos sometidos a la dominación colonial había colocado al Comité Especial en mejor situación para comprenderlos y ayudarles en su legítima lucha por la libertad y la independencia. A los peticionarios les había resultado más fácil comparecer ante el Comité, tanto para confirmar la iniquidad del sistema colonial como para presentar nuevas ideas y sugerencias, dando nuevos elementos a la capacidad del Comité para contribuir a la rápida liquidación del colonialismo. Así lo ilustraba la resolución que se acababa de aprobar respecto al cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General (A/AC.109/188).

572. Añadió que, en ese aspecto, cabía señalar en particular la recomendación al Consejo de Seguridad en el sentido de que las medidas contra Portugal, Sudáfrica y el régimen minoritario de Rhodesia del Sur, previstas en el Capítulo VII de la Carta, fueron obligatorias para todos los Estados Miembros. Esa era la debida respuesta al pedido que la Asamblea General había hecho en su resolución 2105 (XX) al Comité Especial, de que hiciera sugerencias que el Consejo pudiera atender al estudiar las medidas que conviniera adoptar para contrarrestar las amenazas a la paz y se-

guridad internacionales provocadas por hechos ocurridos en los territorios coloniales.

573. Además de repetir que la lucha de los pueblos coloniales por ejercer su derecho de libre determinación e independencia era una lucha legítima, el Comité había ido más lejos que en otras resoluciones anteriores, al invitar a todos los Estados a prestar apoyo moral y material a los movimientos de liberación de los territorios coloniales.

574. En la evolución del pensamiento del Comité también merecía señalarse la condenación implícita de las bases militares en los territorios coloniales y su pedido de que las Potencias coloniales las desmantelasen y se abstuviesen de establecer otras en sus colonias.

575. Por otro lado, las resoluciones aprobadas por el Comité durante su visita a África ponían de manifiesto que se renovaba la importancia atribuida a los factores económicos en lo que se refería al cumplimiento de la Declaración. La experiencia enseñaba que esos factores, que adquirían la forma de intereses financieros económicos que obraban en concierto con las Potencias coloniales, entorpecían con harta frecuencia el progreso hacia la aplicación de la Declaración.

576. Las deliberaciones del Comité también demostraban claramente la necesidad de lograr que la independencia se basara en los anhelos libremente expresados de los pueblos.

577. Manifestó el Presidente su profundo reconocimiento a la Organización de la Unidad Africana y a la Liga de los Estados Árabes por su efectiva colaboración a las deliberaciones del Comité, y su esperanza de que esos vínculos se consolidaran. También dio las gracias, en nombre del Comité, a todos los Gobiernos invitantes por su cálida acogida y amable cooperación.

578. El representante de Etiopía dijo que el Comité Especial durante la visita a África había tenido ocasión de apreciar cuán profundos eran los sentimientos y anhelos africanos por la liquidación del colonialismo en el continente. Las cinco capitales donde el Comité se había reunido constituían una representación de África bastante amplia. Por lo tanto, la visita había sido muy útil, ya que había permitido una vinculación estrecha y fortalecido la confianza depositada por los africanos en el Comité y en las Naciones Unidas en su conjunto. Testimonio de ello era la cálida y espontánea acogida dispensada al Comité.

579. Los discursos y resoluciones de esa serie de reuniones habían dado estímulo a todos los africanos que luchaban por la libertad. Naturalmente, el Comité era una fuerza moral y no una panacea, pero había crecido en estatura a los ojos del mundo por la tenacidad de sus propósitos.

580. El camino de la descolonización era largo, pero se lo había tomado por el rumbo acertado. Gracias al noble empeño del Comité, aunque forzosamente modesto, el colonialismo estaba acosado y sería vencido si no se le daba tregua.

581. Quería dejar constancia de la adhesión de la delegación de Etiopía al agradecimiento expresado por el Presidente del Comité, en nombre de éste, al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Argelia por su fraternal acogida. La gran obra de reconstrucción y des-

arrollo nacionales emprendida en Argelia era prueba de lo que un pueblo dueño de su destino era capaz de alcanzar. Concluyó formulando los mejores votos de su Gobierno respecto a toda otra conquista por el camino del progreso, la democracia y la justicia social.

Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular

582. El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular se dirigió a los miembros del Comité Especial para decirles, en nombre del Presidente Boumedienne, del Consejo Revolucionario, del Frente de Liberación Nacional y del Gobierno de Argelia, cuánto habían apreciado los testimonios unánimes de simpatía manifestados por los miembros del Comité a Argelia, que tanto había sufrido durante su larga y sangrienta guerra de liberación. Le resultaba particularmente alentador observar que los inmensos sacrificios hechos por el pueblo argelino en aras de la libertad no sólo habían permitido a Argelia lograr la independencia, sino que también podían constituir un estímulo para los pueblos subyugados que todavía luchaban contra el dominio colonial. Asimismo, el Ministro felicitó vivamente al Comité, que no había escatimado esfuerzo alguno para llevar a bien su noble misión, y que con sus fructíferos debates había logrado resultados positivos y alentadores.

583. Opinaba, como lo había señalado el Presidente, que la presencia en África del Comité Especial, que se dedicaba a la causa de la descolonización, reflejaba la nueva orientación adoptada por las Naciones Unidas. La aprobación de la resolución histórica sobre la concesión de la independencia a los territorios y a los pueblos coloniales constituía una etapa decisiva en la evolución de las Naciones Unidas. Añadió que se podían medir el alcance de los progresos realizados y el camino recorrido al recordar que el Comité sólo había reemplazado en 1961 a la extinta y ridícula Comisión para la Información, cuyo mandato se aplicaba a todos los problemas relativos a los territorios no autónomos, salvo el problema prioritario, esencial y fundamental de la situación política y del logro de la independencia. Argelia, que había luchado tantos años antes de poder hacer oír en los órganos internacionales la voz de su revolución por tanto tiempo sofocada, se felicitaba de que el Comité Especial hubiera podido ir a tierras africanas para escuchar a los representantes de los movimientos de liberación, informarse más directamente sobre la situación de los territorios dependientes y ponerse en contacto más estrecho con la realidad colonial.

584. Añadió que aun cuando rendía homenaje en esta forma a las Naciones Unidas por los importantes progresos que habían impulsado a la opinión internacional a buscar una solución al problema degradante del colonialismo, no podía por menos de hacer constar con indignación y profunda inquietud que la resolución 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia seguía siendo letra muerta como tantas otras resoluciones, según se deducía de todas las peticiones escuchadas por el Comité. Las Potencias coloniales, responsables del porvenir de los pueblos bajo su administración, se negaban a cooperar con el Comité Especial, desafiaban impunemente a las Naciones Unidas y proclamaban su desprecio absoluto por la opinión internacional. A este respecto había que deplorar una vez más la actitud

negativa del Reino Unido, ausente en las reuniones del Comité, aunque presente en Salisbury, donde se comprometía con Ian Smith en lugar de responder al llamamiento de las Naciones Unidas y emprender lealmente la senda de la descolonización.

585. Por esas razones Argelia estimaba que había caducado la era de las resoluciones estériles y que debían ponerse en práctica medidas efectivas y urgentes para suprimir el colonialismo y la explotación del hombre por el hombre. Había llegado el momento de transferir todos los poderes a los pueblos dependientes con el fin de permitirles determinar libremente su condición política, asegurar la construcción de su país y promover el desarrollo en todas las esferas, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre tanto, Argelia, fiel a su revolución y a sus mártires caídos en el campo de la libertad, continuaría prestando sin reserva su ayuda material y moral a todos los movimientos de liberación en la justa y legítima lucha impuesta por el colonialismo, que libraban para reconquistar su dignidad y su derecho imprescriptible a la libre determinación. Argelia sabía por experiencia que era vano esperar que Lisboa, Pretoria o Salisbury concedieran la independencia pacíficamente.

586. En lo que se refería más particularmente a la cuestión de los Territorios bajo dominación portuguesa que el Comité acababa de examinar en Argel, dijo que el Comité merecía que se elogiaran la seriedad y la serenidad que habían reinado en sus debates y la constante atención que había prestado a los peticionarios. Las resoluciones aprobadas por el Comité a la luz de una información pacientemente recopilada permitían esperar todavía que las Naciones Unidas harían frente a sus responsabilidades y cumplirían sus obligaciones. Al adoptar la importante iniciativa de recomendar al Consejo de Seguridad que impusiera a todos los Estados la obligación de aplicar las medidas previstas por la resolución 2107 (XX), el Comité había insistido en una de las disposiciones más apropiadas para inducir a Portugal a que se retractara en caso de que dicha resolución se mantuviera y aplicara. Estos resultados respondían a las esperanzas que los movimientos de liberación y los pueblos africanos habían puesto en el Comité. Honraban a las Naciones Unidas y contribuían a reforzar su prestigio. En realidad la misión del Comité, después de su periplo por tierras africanas, no había hecho más que comenzar. Debía proseguirse infatigablemente en las Naciones Unidas con objeto de inducir a todos los Estados a apreciar de una manera más sana la realidad colonial. La dedicación de Argelia a los principios universales de las Naciones Unidas, el celo con que estaba dispuesta a apoyar toda iniciativa tendiente a consolidar esta Organización, la fe y el optimismo que la animaban con respecto al porvenir de la humanidad, y, por último, su insaciable sed de justicia y de libertad eran factores que hacían resaltar los objetivos que perseguía el Comité y que se proponía alcanzar el país que tenía el honor de acogerlo.

587. En nombre del Consejo Revolucionario y del Gobierno, felicitaba vivamente al Comité por la actividad intensa que había desplegado en Argel y en otras capitales del continente africano. Esta actividad había permitido hacer progresar considerablemente el cumplimiento de su tarea, tal vez muy ardua, aunque también muy inspiradora. Añadió que gracias a una sana emulación y al hecho de que se hubieran conjugado

tantos deseos para acelerar el proceso de descolonización, con el concurso sumamente valioso e indudablemente necesario de valerosos combatientes por la libertad, portadores de vigorosas ideas, imbuidos de esperanza y de fe y resueltos a vencer y a transformar radicalmente el porvenir de sus pueblos anacrónicamente subyugados, ese esfuerzo había podido producir un resultado por lo menos alentador. El Comité acababa de demostrar — lo que ya era sabido — que la inmensa mayoría de los Estados Miembros que lo integraban, y sobre todo los que habían surgido últimamente, respetaban y alentaban, a pesar de las dificultades inherentes a su juventud, la lucha de los pueblos que seguían oprimidos, y por ende aplicaban óptimamente y con hechos los principios que mejor definían el espíritu de las Naciones Unidas. La solidaridad activa que el Comité había reafirmado y manifestado una vez más representaba con toda seguridad un paso decisivo en la descolonización, y en los esfuerzos por afianzar la independencia de los jóvenes Estados. Argelia, que durante su guerra de liberación había contado con un gran apoyo gracias al cual la causa que encarnaba pudo progresar eficazmente y terminar con éxito, apreciaba ahora la acción del Comité en su justo valor. El apoyo de todos los movimientos de liberación en el mundo constituía para el pueblo argelino y su Gobierno un principio moral intangible y una idea orientadora permanente. Argelia apoyaba incondicionalmente a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea (Bissau), Rhodesia del Sur, el África Sudoccidental, Sudáfrica, Palestina, Omán, Adén y todos los territorios todavía bajo dominio colonial que estaban empeñados en una lucha heroica por sacudir el yugo colonial y reconquistar su libertad. Argelia les brindaría ese apoyo hasta el día en que pudieran ocupar el lugar que legítimamente les pertenecía en la familia de los Estados independientes del tercer mundo y el que también les correspondía legítimamente en el concierto de las naciones.

588. La solidaridad del Comité no sólo reflejaba la acción desplegada en favor de los países bajo dominio colonial, sino también los esfuerzos de los jóvenes Estados por afianzar su independencia sobre bases cada día más sanas. La independencia nacional no se hacía real ni adquiría verdadero sentido más que al definir y forjar progresivamente su propio contenido económico y social. Este afianzamiento tropezaba a menudo con intentos de oposición que obedecían a situaciones tan complejas como caducas, y eran la consecuencia inevitable de una lucha de influencia entre los intereses extranjeros únicamente.

589. La aprobación de la resolución respecto de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en la que se reconocía la legitimidad de la lucha en todas sus formas y sobre todo de la más eficaz de ellas, la de los pueblos bajo dominación colonial, y en la que se invitaba a todos los Estados a prestar ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional de esos territorios, había constituido una acertada revolución en los métodos de las Naciones Unidas. Había sido inevitable, habida cuenta de la obstinada ceguera de algunas Potencias coloniales. El reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los pueblos aún bajo dominio colonial ponía fin a la época en que los colonialistas y sus naturales aliados consideraban el combate que liberaban estos pueblos oprimidos — humillados, despojados de todos sus derechos, incluso el de vivir libre-

mente — por reconquistar su independencia, como una violación de las leyes establecidas. Esta dignidad de la lucha, que ahora subrayaba uno de los principales órganos de la Asamblea General, era un estímulo apreciable para todos los movimientos de liberación nacional. Por otra parte, el llamamiento lanzado a todos los Estados por el Comité Especial para que prestaran ayuda material y moral a los pueblos oprimidos limitaba toda interpretación tendenciosa y abusiva de parte de los países colonialistas respecto del principio de la no intervención en los asuntos internos de un Estado. La valiosa ayuda solicitada permitiría a los países que defendían la justicia y la liberación y se preocupaban de preservar la paz en el mundo respaldar eficazmente a los pueblos oprimidos en su lucha, que ahora era universal, por eliminar un colonialismo que cada día amenazaba más la seguridad internacional. Acabaría también con todas las tentativas bélicas de unos Estados que soñaban con perpetuar una situación colonial y de otros que tenían la nostalgia de los imperios desmembrados.

590. El orador, en nombre del Gobierno de su país, felicitó al Comité por haber recomendado a los organismos especializados de las Naciones Unidas y a otros organismos de socorro que aumentaran su ayuda a los refugiados de los territorios coloniales, en colaboración con los movimientos de liberación nacional. Añadió que los peticionarios que se habían presentado ante el Comité habían mostrado el aspecto social del combate sagrado que se libraba contra la ocupación extranjera, combate que revestía una importancia primordial para todos los dirigentes de liberación en el mundo. Estos peticionarios se percataban de que el porvenir de su país después de la independencia dependería esencialmente de las fuerzas vivas que su pueblo pudiera proporcionar y de las nuevas energías así liberadas. Al sugerir a los organismos especializados que aumentaran su ayuda a los pueblos oprimidos y coordinaran su acción con los representantes de dichos pueblos, el Comité hacía justicia a los hombres que estaban forjando el destino de su patria. El Gobierno de Argelia apoyaba incondicionalmente esta decisión.

591. Durante su estancia en Argel el Comité había adoptado otras decisiones igualmente importantes. Esas decisiones confirmaban la voluntad inquebrantable de los Estados Miembros de descolonizar rápidamente los territorios ocupados. Este esfuerzo, meritorio cuando estaba secundado por la cooperación sincera de la Potencia todavía administradora, daría resultados en proporción con las esperanzas que suscitaba. Al invitar a una delegación del Comité Especial a la Guinea Ecuatorial, el Gobierno de España había dado un primer paso positivo. Pero ese paso sólo sería enteramente consecuente cuando Guinea Ecuatorial se convirtiera en un país soberano, libre e independiente, lo que, por otra parte, no podía dejar de ocurrir.

592. Sin embargo, la posición de otras Potencias coloniales no se había modificado en absoluto. Portugal, entre otras, seguía negándose a cooperar con las Naciones Unidas. Esta intransigencia se debía mucho más al apoyo que prestaban a Portugal algunas Potencias occidentales que a los medios que el propio Gobierno de Lisboa creía poseer. Era evidente que esos Estados occidentales, al ayudar a las fuerzas armadas portuguesas a resistir a las legítimas reclamaciones de los pueblos oprimidos, querían proteger intereses económicos y estratégicos de primer orden. Cuando se aca-

bara con los últimos baluartes del colonialismo, esas mismas Potencias querrían sustituir esta complicidad por una acción indirecta tendiente a oponerse a la consolidación de la independencia adquirida para prolongar indefinidamente la explotación de los pueblos de esos territorios. Esta nueva forma de colonialismo entrañaba en potencia peligros reales, que sería vano negar; por lo tanto, el esfuerzo de descolonización, so pena de quedar incompleto, debería extenderse a situaciones neocoloniales. Incumbía directamente al Comité desempeñar plenamente la misión que le había sido confiada. Este aspecto debía atenderse debidamente si se quería lograr una independencia total y completa. En caso contrario, la descolonización perdería ante los ojos de los pueblos gran parte de su significado.

593. Este peligro era todavía mayor cuando, como en el caso de algunos territorios coloniales en vías de independencia, se observaba que la Potencia administradora colocaba elementos autóctonos que representaban los intereses económicos, y a menudo también políticos, de los propios colonialistas. Este procedimiento no podía por menos de prolongar la explotación de los pueblos de esos territorios al concederse la independencia. El Comité Especial no debía considerar que había cumplido su mandato cuando la independencia se adquiriese así. Convendría que las comisiones que representaban a las Naciones Unidas pudiesen trasladarse a los territorios que estaban próximos a su independencia, a fin de que sus pueblos pudieran elegir libremente a sus dirigentes auténticos bajo el control de las Naciones Unidas. La idea de la concesión de la independencia debía concebirse en un marco dinámico en el que pudieran florecer las legítimas aspiraciones de los pueblos. Cualquier restricción limitaría el alcance de este derecho natural y perjudicaría el objetivo perseguido tanto por los propios pueblos como por las Naciones Unidas.

594. En conclusión, el Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia reiteró al Comité las felicitaciones del pueblo y del Gobierno argelino por los resultados decisivos obtenidos en Africa, y le deseó pleno éxito en el cumplimiento de su mandato. También dio las gracias a los representantes que tan generosa y amablemente habían elogiado a Argelia y al pueblo argelino, y les expresó los profundos y sinceros sentimientos de amistad y estima de Argelia hacia los pueblos que ellos representaban. Pidió a los miembros del Comité que se mostraran indulgentes por las fallas propias a la organización de la conferencia. Los esfuerzos desplegados jamás podrían reflejar el sentimiento de hospitalidad del pueblo argelino, que se preciaba de ser uno de los más dignos herederos de las bellas tradiciones afro-árabes. Lo esencial era que durante esa breve estancia cada miembro del Comité se hubiese sentido verdaderamente como en su propia patria, antes de volver a disfrutar el placer de un bien merecido descanso.

F. DECISIONES ADOPTADAS CON OCASIÓN DE LA VISITA DEL COMITÉ ESPECIAL A AFRICA

Adopción de la resolución relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a varios territorios coloniales, examinada por el Comité Especial durante las sesiones celebradas en Africa en 1966

595. En la 454.ª sesión del Comité Especial, celebrada el 21 de junio de 1966, el representante de la República Unida de Tanzania presentó un proyecto de

resolución patrocinado por Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Sierra Leona, Siria, Túnez, República Unida de Tanzania y Yugoslavia (A/AC.109/L.315). Dada la relación que guardaban entre sí los problemas coloniales que había estudiado el Comité, los patrocinadores consideraban aconsejable complementar y resumir las distintas resoluciones pertinentes en una sola resolución general.

596. El Presidente señaló los siguientes aspectos importantes del proyecto de resolución: en el quinto párrafo del preámbulo, el Comité Especial lamentaba la actitud del Reino Unido por estar convencido de que este país tenía obligación de asistir a las reuniones celebradas en Africa, no sólo como miembro del Comité Especial, sino también como Potencia administradora. En el sexto párrafo del preámbulo, había sido necesario poner de relieve la actitud negativa de algunas Potencias coloniales, atestiguada por un peticionario tras otro. El párrafo 3 de la parte dispositiva era una respuesta a la actitud de desafío a la opinión mundial y a las recomendaciones de la Organización de que daban muestras Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Se basaba en la posición que siempre había adoptado el Comité Especial, así como el grupo africano en el Consejo de Seguridad. El párrafo 4 de la parte dispositiva reflejaba la preocupación que causaban al Comité los intereses financieros extranjeros, que no sólo colaboraban con las Potencias administradoras sino que les proporcionaban fondos para que pudieran continuar sus guerras de opresión. El párrafo 5 de la parte dispositiva reflejaba declaraciones hechas anteriormente, pero también difería algo de anteriores resoluciones al solicitar que se suministrase ayuda material a los movimientos de liberación nacional. Después de ver una película documental sobre los territorios portugueses, el Comité había confirmado su convencimiento de que era precisa la ayuda urgente no sólo del Comité Especial, sino también de las organizaciones del mundo entero. El párrafo 7 de la parte dispositiva revestía importancia vital, dado que las Potencias administradoras necesitaban instalaciones militares para seguir aplicando medidas represivas. La existencia de esas bases no sólo era una amenaza para la población de los territorios, sino también un peligro para los países vecinos. La recomendación que figuraba en el párrafo 8 de la parte dispositiva, donde se pedía que se negara toda ayuda a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica, se refería sólo al tiempo que durase su dominación colonial sobre los territorios. El Presidente pidió que todo el Comité apoyase ese párrafo.

597. El representante de Etiopía apoyó el proyecto de resolución (A/AC.109/L.315) en nombre del grupo de países de Africa y Asia y Yugoslavia, y elogió al Presidente por las excelentes observaciones con que lo había presentado. Era evidente que el documento contenía un resumen de toda la labor del Comité en Africa y daba una visión general de los puntos más destacados de los debates y resoluciones.

598. El último párrafo del preámbulo, donde se señalaba la amenaza que constituía el colonialismo para la paz y seguridad internacional, revestía vital importancia, pero no necesitaba explicación, ya que se trataba de algo perfectamente claro. Teniendo en cuenta que habían pasado muchos años desde la aprobación de la resolución 1514 (XV), no estaba de más que se reafirmase en el párrafo 1 de la parte dispositiva el derecho

inalienable de los pueblos de los territorios coloniales a la libertad y a la independencia.

599. Se sumó al representante de Tanzania para destacar la importancia del párrafo 5 de la parte dispositiva, que establecía una base jurídica para prestar apoyo a los movimientos de liberación nacional en los territorios coloniales. El párrafo 8 de la parte dispositiva serviría para centrar la atención del mundo en la grave amenaza que representaba para la paz la continuación del colonialismo. Era preciso que todos los pueblos del mundo se convenciesen de los males que entrañaba la dominación colonial y de la urgente necesidad de liquidarla lo antes posible. Anunció su apoyo al proyecto de resolución y recomendó encarecidamente al Comité que lo aprobase.

600. En la 455a. sesión, celebrada el 22 de junio, el representante de la República Unida de Tanzania dijo que sólo se habían hecho dos modificaciones como resultado de las consultas efectuadas la víspera por la tarde por los autores del proyecto de resolución. La primera se aplicaba al párrafo 7 de la parte dispositiva, que se había modificado así:

"Pide a las Potencias coloniales que dismantelen las bases militares instaladas en los territorios coloniales y que se abstengan de establecer otras nuevas."

La segunda modificación se refería a los autores del proyecto de resolución: Costa de Marfil, Irán y Madagascar habían pedido que se retirasen sus nombres.

601. El representante de Polonia dijo que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) eran los dos organismos que más asistencia daban a las Potencias coloniales. De hecho, la víspera se había informado al Comité Especial que el BIRF iba a prestar nueva asistencia a Portugal. Propuso, por ello, que el párrafo 8 de la parte dispositiva fuera modificado en la forma siguiente:

"Pide a todos los Estados y a las instituciones internacionales, incluidos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, que se abstengan de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica mientras no renuncien ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial."

602. El representante de la República Unida de Tanzania anunció que los autores del proyecto de resolución aceptaban la enmienda de Polonia, la cual se incluiría en el texto revisado (A/AC.109/L.315/Rev.1).

603. El representante de Venezuela declaró que hubiese preferido que no se presentase en el momento actual el proyecto de resolución que figura en el documento A/AC.109/L.315/Rev.1. A su juicio, hubiera sido preferible esperar hasta que el Comité Especial regresase a Nueva York. El proyecto contenía una serie de conceptos, principios y enunciados sobre los cuales su delegación había expuesto detalladamente su actitud en distintas ocasiones, actitud que no había variado. Para que la delegación de Venezuela pudiera votar sobre dicho proyecto tendría que pedir instrucciones precisas a su Gobierno. Como no estaba en condiciones de obtenerlas en Argel, la delegación venezolana se veía a su pesar obligada a no participar en la votación.

604. El representante de Australia hizo suyas las observaciones iniciales del representante de Venezuela

y dijo que su delegación se oponía a las resoluciones de la índole del proyecto que examinaba el Comité Especial porque carecían de precisión sobre importantes puntos de principio. El último considerando del proyecto de resolución estaba redactado en forma inaceptable para la delegación australiana. Expresó una vez más su oposición a los términos del párrafo 3 de la parte dispositiva, a cuyo respecto ya había dado a conocer la opinión de su delegación sobre el empleo de la fuerza en Rhodesia del Sur. Apuntó que, con todo, deseaba señalar que su Gobierno figuraba entre los primeros que se habían negado a reconocer el régimen ilícito de Salisbury y, además de retirar a su representante, había iniciado la aplicación de medidas trascendentales de carácter comercial y financiero para apoyar las medidas propuestas por el Gobierno del Reino Unido y el Consejo de Seguridad. Por las razones citadas la delegación de Australia se opondría al proyecto de resolución que examinaba el Comité.

605. El representante de Chile insistió en que un proyecto de resolución tan importante no podía someterse a votación precipitadamente. Convenía con la mayoría de los conceptos enunciados en el proyecto y sus reservas sólo se referían a la forma y la terminología. Sin embargo, como el proyecto contenía un resumen de las actividades del Comité durante su gira y definía una política para el porvenir, la delegación de Chile no podría participar en la votación porque no había podido recibir instrucciones de su Gobierno.

606. El representante de Italia explicó que su delegación no había podido obtener instrucciones de su Gobierno y que por ello no participaría en la votación.

607. El representante de los Estados Unidos de América dijo que compartía las reservas expresadas por oradores anteriores sobre la presentación a última hora de un proyecto de resolución en el cual figuraban disposiciones nuevas y sustantivas. Indicó que su delegación apoyaba muchos de los objetivos básicos expresados en el proyecto de resolución, pero juzgaba que la cooperación pacífica era lo más conveniente para los pueblos de los territorios interesados y las Potencias administradoras. Como otros párrafos del proyecto eclipsaban esos objetivos, la delegación de los Estados Unidos votaría en contra.

608. El representante de Costa de Marfil lamentó profundamente que su delegación no pudiera figurar entre los autores del proyecto de resolución a causa de un problema de terminología relativo al párrafo 7. Por falta de tiempo no se había podido llegar a una fórmula de transacción. La delegación marfileña apoyaba el proyecto en su totalidad pero tenía ciertas reservas de principio sobre el párrafo 7. Dio seguridades a los que luchaban justa y noblemente por la libertad que el Gobierno y el pueblo de la Costa de Marfil los apoyaban decididamente.

609. El representante de Madagascar declaró que su delegación votaría en favor del proyecto de resolución, que contenía una serie de ideas y principios a los que siempre había dado su respaldo en el Comité. Sin embargo, tenía graves reservas sobre el párrafo 7. Estimó que la cuestión de las bases militares no era de la competencia del Comité Especial. El mandato del Comité estribaba en comprender cuáles eran las aspiraciones de los habitantes de los Territorios bajo dominación portuguesa, pero a ellos les incumbía pronunciarse sobre las bases cuando fueran independientes.

610. El representante de Dinamarca dijo que su delegación se oponía al párrafo 3 de la parte dispositiva porque no podía aceptar que se formulara al Consejo de Seguridad una recomendación tan general y fundada en principios cuyas consecuencias eran tan imprevisibles. Dinamarca tampoco apoyaba los considerandos quinto y octavo, ni los párrafos 4, 7 y 8 de la parte dispositiva. Añadió que no proseguía el examen del proyecto de resolución por falta de instrucciones de su Gobierno, pero que la actitud progresista de Dinamarca respecto a los problemas coloniales era bien conocida. Por tales razones tendría que abstenerse en la votación sobre el proyecto en su totalidad y votaría en contra de los párrafos 3 y 7 de la parte dispositiva si se ponían a votación separada.

611. El representante de Irán, refiriéndose al párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, dijo que su Gobierno se oponía al establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio y había expuesto su opinión al respecto con toda claridad en muchas declaraciones oficiales; por ende, se oponía en principio a toda creación de dichas bases. Sin embargo, como al Comité Especial le interesaba la descolonización, la delegación iraní juzgaba que el asunto de las bases sólo podía examinarse teniendo en cuenta su efecto sobre las aspiraciones de los pueblos locales relativas a la independencia. De otro modo, el asunto no sería de la competencia del Comité. Por tal razón, la delegación de Irán no podía aceptar los términos del párrafo 7 de la parte dispositiva y había tenido que retirar su nombre de la lista de patrocinadores.

612. El representante de la República Unida de Tanzania respondió, en nombre de los autores del proyecto de resolución (A/AC.109/L.315/Rev.1), a los puntos que se habían planteado al respecto. Ciertas delegaciones habían expresado el parecer de que el proyecto se había presentado apresuradamente, pero en realidad había sido presentado al Comité Especial la víspera y, en consecuencia, las delegaciones habían dispuesto de bastante tiempo para formular sugerencias si hubiesen querido hacerlo. De todos modos, el proyecto sólo contenía un elemento nuevo, es decir, una referencia al hecho de que el Reino Unido no participaba en los trabajos del Comité, sobre lo cual habían formulado observaciones la mayoría de los miembros al iniciarse el período de sesiones en Africa.

613. En cuanto a la opinión de ciertas delegaciones según la cual el párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto escapaba a la competencia del Comité, señaló que sus términos eran muy similares a los del párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, la cual había sido apoyada por la mayoría de los miembros del grupo afroasiático y que daba además al Comité un mandato adicional para proseguir sus trabajos. Aunque en el proyecto no figurase una referencia general a la cuestión de las bases militares, los autores convenían por supuesto en que sólo debían establecerse con el consentimiento del pueblo. Pero en lo tocante a los territorios coloniales, la presencia de bases militares después de la independencia significaría de hecho la continuación del colonialismo.

614. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, los miembros africanos de las Naciones Unidas siempre habían sostenido la opinión expresada en dicho párrafo.

615. El representante de Costa de Marfil, haciendo uso de la palabra en ejercicio de su derecho de respues-

ta, recordó que la Asamblea General había aprobado un párrafo idéntico al párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero que sólo ella tenía el derecho de hacerlo. Además, ese párrafo había sido objeto de viva controversia en la Asamblea General, ya que sólo se había aprobado por 49 votos contra 37 y 18 abstenciones.

616. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que su delegación se pronunciaría en favor del proyecto de resolución, pues respondía a la actitud que la URSS siempre había defendido, así como a los intereses de los pueblos africanos.

617. Respecto a las bases militares extranjeras en los territorios coloniales, la delegación de la Unión Soviética siempre había juzgado que representaban una amenaza directa a la independencia de la población autóctona y a la soberanía de los Estados, según probaba lo que estaba sucediendo en Adén, Guam o la Isla de Asunción. Ocurría lo mismo en Libia. Las declaraciones de Italia y Australia eran inadmisibles. Los motivos que inspiraban las declaraciones de ciertas Potencias eran bien conocidas; el hecho de que Italia aceptase la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio era asunto suyo, pero a los territorios coloniales jamás se les había consultado. Las bases militares extranjeras se les imponían para que no pudieran lograr la independencia.

618. La versión revisada del proyecto de resolución fue aprobada en votación nominal por 16 votos contra 2 y 1 abstención, a saber:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Dinamarca.

619. El texto de la resolución (A/AC.109/188) aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, dice como sigue:

“El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

“Habiendo celebrado reuniones del 23 de mayo al 22 de junio de 1966 sucesivamente en Dar es Salaam (República Unida de Tanzania), Mogadiscio (Somalia), Addis Abeba (Etiopía), El Cairo (República Árabe Unida) y Argel (Argelia), y habiendo oído a los portavoces de los Gobiernos de esos países,

“Habiendo considerado la situación de varios territorios que aún se hallan bajo dominación colonial,

“Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960,

“Recordando además las resoluciones de la Asamblea General 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, 1810 (XVII) de 17 de diciembre de 1962, 1956 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963 y 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965,

“Lamentando que el Gobierno del Reino Unido no haya participado en las sesiones celebradas por el Comité Especial en África,

“Deplorando la actitud negativa de algunas Potencias coloniales, y sobre todo el que los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica no quieran reconocer el derecho de los pueblos coloniales a la libertad y a la independencia, proclamado en la resolución 1514 (XV),

“Deplorando además la actitud de ciertos Estados que continúan cooperando con los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica en la represión y explotación de la población indígena,

“Reconociendo que el mantenimiento del colonialismo constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y un crimen contra la humanidad,

“1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de los territorios coloniales a la libertad y a la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV);

“2. Deplorea la negativa de ciertas Potencias coloniales a colaborar con el Comité Especial y su constante desconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas;

“3. Recomendando al Consejo de Seguridad que dé obligatoriedad a las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas contra Portugal, Sudáfrica y el régimen de minoría racista de Rhodesia del Sur;

“4. Condena las actividades de los intereses financieros que operan en esos territorios explotando sus recursos humanos y materiales y que impiden el progreso de las respectivas poblaciones hacia la libertad y la independencia;

“5. Reconoce la legitimidad de la lucha de los pueblos que están bajo dominación colonial a ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia e invita a todos los Estados a suministrar ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional en los territorios coloniales;

“6. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a otras organizaciones internacionales de socorro, así como a los organismos especializados, que, en colaboración con el movimiento de liberación de todos los territorios bajo dominación colonial, aumenten su ayuda a los refugiados de esos territorios;

“7. Pide a las Potencias coloniales que desmantelen las bases militares instaladas en los territorios coloniales y que se abstengan de establecer otras nuevas;

“8. Pide a todos los Estados y a las instituciones internacionales, incluidos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, que se abstengan de prestar ayuda en cualquier forma a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica mientras no renuncien ellos a su política de dominación colonial y de discriminación racial;

“9. Pide al Secretario General que tome todas las medidas necesarias para dar la más amplia publicidad posible a los trabajos del Comité Especial, de manera que la opinión mundial pueda estar suficientemente informada de la grave amenaza a la paz que constituye el colonialismo.”

620. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 1º de julio de 1966⁵.

Adopción de la resolución expresiva de gratitud a los gobiernos invitantes

621. En la 455a. sesión, el representante de Irán dijo que tenía el honor de presentar, en nombre de veinte miembros del Comité Especial, un proyecto de resolución (A/AC.109/L.316) por el que el Comité expresaba su gratitud a los Gobiernos que le habían invitado a reunirse en sus países.

622. El Comité podía estar orgulloso de su obra en Africa; había tomado importantes decisiones para lograr la cabal aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y había hecho mucho por consolidar la confianza que tenían en las Naciones Unidas los que aún se hallaban bajo la dominación colonial. El Comité, que había sido objeto de entusiasta acogida en todas partes, tenía una deuda particular de gratitud con los países que le habían dado hospitalidad, ya que con su invitación habían contribuido a acelerar la independencia de todos los países. Esos países habían dado también ocasión a las Naciones Unidas de entablar una relación directa con los pueblos interesados. Para terminar, propuso que se aprobara por aclamación el proyecto de resolución.

623. El representante de Malí declaró que después de la exposición hecha por su colega del Irán, poco le quedaba que decir respecto al proyecto de resolución que acababa de presentarse al Comité. En nombre de todos los patrocinadores del proyecto, expresó sus sinceras gracias a los Estados hermanos de Africa que habían invitado a los miembros del Comité Especial a celebrar parte del período de sesiones en esos maravillosos países, con lo que habían podido darse cuenta de la evolución de la lucha contra el colonialismo en Africa. Su estadía les había permitido comprobar que, cuando el colonialismo se aferraba aún en los países que dominaba, tenían particular importancia los factores económicos a que se habían referido todos los peticionarios y personalidades que habían comparecido ante el Comité, así como la mayor parte de los miembros del Comité.

624. Durante la estadía del Comité en Addis Abeba, el Sr. Diallo Telli, Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana, había puesto en claro ese aspecto de la cuestión, al declarar lo siguiente:

"En conjunto, es indudable que en la situación de Africa se observa en general la agravación de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que representan no sólo la supervivencia del colonialismo sino también el robustecimiento, el año pasado, de la alianza de Portugal, Sudáfrica y los colonos de Rhodesia para consolidar su dominio y conseguir la perennidad del orden colonial y racista en toda la parte meridional de nuestro continente. Es un hecho que esta alianza inicua de los regímenes más retrógrados y más opresivos — objeto, los tres, de varias censuras unánimes de las Naciones Unidas — cuenta, a pesar de todo, con una poderosa

complicidad. En esta complicidad intervienen fuerzas múltiples, los individuos, sociedades o Estados que tienen inversiones en el sur del continente y viven y prosperan de la explotación usurpada de la riqueza africana en estas regiones y en quienes recae, por lo tanto, en gran parte, la responsabilidad por el empeoramiento de la situación y el drama sangriento que viven los africanos de Sudáfrica, Rhodesia del Sur y los Territorios bajo dominación portuguesa. Como a esa complicidad hay que atribuir, en gran parte, la culpa de la parálisis que sufren todos los afanes pacíficos de descolonización, es natural que constituya el mayor obstáculo a los propios esfuerzos de ustedes. Por consiguiente, tienen ustedes que hallar a esta situación, tan grave como clara, la debida solución, pues sin ella no pueden esperar resultados positivos ni este Comité ni quienes obran en favor de la descolonización pacífica. Se trata de una comprobación decisiva, pues en materia de descolonización ya no hacen falta resoluciones sino soluciones, y los obstáculos a éstas los presentan, por un lado, la alianza de los regímenes de Pretoria, Salisbury y Lisboa y, por otro, el mantenimiento de la complicidad con que esta alianza goza en Europa y América, sobre todo en el marco de la asistencia bilateral o de la que ofrecen las organizaciones como la OTAN. Esa es una de las grandes dificultades que paralizan los esfuerzos de descolonización en Africa. Y a ella conviene que se refieran en lo esencial los esfuerzos del Comité que ustedes forman."

625. Después de oír a los peticionarios y de asistir a la proyección de una película tomada por varios de ellos, los miembros del Comité habían de sentirse seguramente más convencidos que nunca de que el colonialismo era una vergüenza de la humanidad y de la conciencia humana, como muy bien lo había manifestado, por otra parte, el representante de Dinamarca. Concluyó agradeciendo a todos los Gobiernos invitantes su acogida y los medios proporcionados al Comité para el cumplimiento de su tarea: todos habían demostrado su conocido y sincero deseo de colaborar con las Naciones Unidas. Propuso, por lo tanto, que el Comité aprobara por aclamación el proyecto de resolución de las 20 Potencias (A/AC.109/L.316).

626. En la misma sesión, el Comité Especial aprobó por aclamación el proyecto de resolución (A/AC.109/L.316). El texto de la resolución (A/AC.109/189) dice como sigue:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo celebrado reuniones del 23 de mayo al 22 de junio de 1966 sucesivamente en Dar es Salaam (República Unida de Tanzania), Mogadiscio (Somalia), Addis Abeba (Etiopía), El Cairo (República Árabe Unida) y Argel (Argelia) y habiendo oído a los portavoces de los Gobiernos de esos países,

"Expresa su profunda gratitud a los Gobiernos y a los pueblos de la República Unida de Tanzania, Somalia, Etiopía, la República Árabe Unida y Argelia por haber invitado al Comité Especial a celebrar sus reuniones en sus respectivas capitales, por haberle proporcionado los servicios necesarios para esas reuniones y por su generosa y amable hospitalidad."

⁵ Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7395.

ANEXO I

Texto del comunicado expedido el 14 de mayo de 1966 por el Presidente en nombre del Comité Especial

En respuesta a las invitaciones de los Gobiernos de Argelia, Etiopía, la República Árabe Unida, la República Unida de Tanzania y Somalia, el Comité Especial de los Veinticuatro ha decidido celebrar una serie de reuniones este año en Argel, Addis Abeba, El Cairo, Dar es Salaam y Mogadiscio.

Esta decisión fue adoptada a la luz de lo dispuesto en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 1654 (XVI) de la Asamblea General, de 27 de noviembre de 1961, en el que, al establecer el Comité Especial se le autoriza a que "celebre reuniones fuera de la Sede de las Naciones Unidas, siempre y cuando esas reuniones sean necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones". El Comité Especial también tuvo presente que la Asamblea General, en el párrafo 7 de la parte dispositiva de su resolución 2105 (XX), de 20 de diciembre de 1965, había aprobado "el programa de trabajo previsto por el Comité Especial para 1966, en especial la posibilidad de organizar una serie de reuniones en África" y había autorizado los créditos necesarios en el presupuesto para 1966.

Al decidir celebrar otra serie de reuniones en África este año, el Comité Especial tuvo especialmente presentes los resultados positivos conseguidos con su visita a África el año anterior. Aunque, debido a la falta de cooperación de las Potencias administradoras interesadas, el Comité Especial no pudo visitar los territorios coloniales objeto de su estudio en África el año pasado, su proximidad a esos territorios le permitió establecer un contacto más íntimo con las realidades de su situación y tener un conocimiento más directo acerca de las aspiraciones de esos pueblos. La experiencia del Comité Especial en África durante el año pasado hizo así posible la aprobación de varias resoluciones importantes relativas a esos territorios, que constituyeron la base de las decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

La labor del Comité Especial en África el año pasado también se vio facilitada por la cooperación que pudo establecer con la Organización de la Unidad Africana mediante la participación del Comité Coordinador de la Liberación de África y del Secretario General Administrativo de esa organización.

El Comité Especial observa con honda preocupación que las renovadas esperanzas de conseguir la libertad y la independencia sin demora que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales despertó en esos pueblos cuando fue aprobada, hace ya más de cinco años, no se han visto cumplidas, con algunas excepciones. Por el contrario, debido a la actitud negativa o a la falta de cooperación de las Potencias administradoras interesadas se ha progresado muy poco en lo tocante a la aplicación de la Declaración en la mayoría de los territorios, inclusive en los más extensos territorios de África, que recibieron la atención del Comité Especial en años anteriores.

El Comité Especial tiene el convencimiento de que su próxima visita a África no sólo pondrá de manifiesto la creciente preocupación de las Naciones Unidas por la situación de los pueblos coloniales sino que además reforzará su propia capacidad de asistir a esos pueblos en su lucha por la independencia. Esta consideración tiene especial importancia en vista de la petición de la Asamblea General, que figura en su resolución 2105 (XX), de que el Comité Especial, en su investigación de los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la Declaración, recomiende una fecha límite para la concesión de la independencia a cada uno de los territorios coloniales considerados. Además, la visita a África del Comité Especial facilitará que comparezcan ante él los representantes de movimientos nacionalistas que deseen dar a conocer sus opiniones sobre el porvenir de sus países y a quienes, en otras circunstancias, les resultaría imposible desplazarse a Nueva York.

Las reuniones del Comité en África se ajustarán al programa siguiente:

Dar es Salaam, República Unida de Tanzania: del 22 al 30 de mayo de 1966;

Mogadiscio, Somalia: del 31 de mayo al 3 de junio de 1966; Addis Abeba, Etiopía: del 4 al 9 de junio de 1966;

El Cairo, República Árabe Unida: del 9 al 16 de junio de 1966; Argel, Argelia: del 16 al 22 de junio de 1966.

Los temas del programa del Comité Especial para estas reuniones abarcan todos los territorios coloniales en África, Adén, Omán, la Isla Mauricio y las Islas Seychelles.

ANEXO II

Lista de los representantes que asistieron a las reuniones del Comité Especial en África*Afganistán:*

Sr. Abdul Samad Ghaus

Australia:

Sr. Dudley McCarthy, M. B. E.

Sr. John Howard Brook

Bulgaria:

Sr. Matey Karasimeonov

Costa de Marfil:

Sr. Julien Kacou

Chile:

Sr. Hernán Sánchez

Dinamarca:

Sr. Hans R. Tabor (en Dar es Salaam, Mogadiscio y Addis Abeba)

Sr. Skjold G. Mellbin

Srta. Karen Hansen (en Dar es Salaam, Mogadiscio, Addis Abeba y El Cairo)

Estados Unidos de América:

Sra. Eugenie M. Anderson

Sr. Richard E. Johnson

Sr. Donald McHenry

Sr. Raymond Perkins

Etiopía:

Sr. Getachew Mekasha

Sr. Berhane Deressa

India:

Sr. Prem Bhatia (en Dar es Salaam)

Sr. S. Sen (en Addis Abeba y El Cairo)

Sr. R. Goburdhun (en Argel)

Sr. C. R. Gharekhan

Sr. Frank H. C. John

Irán:

Sr. Mohsen S. Esfandiary

Irak:

Sr. Ala'uddin Aljubouri

Sr. Adnan Pachachi (en El Cairo)

Italia:

Sr. Ludovico Carducci Artenisio

Madagascar:

Sr. Gabriel Rakotoniaina

Malí:

Sr. Mamadou Moctar Thiam

Polonia:

Sr. Kazimierz Smiganowski

República Unida de Tanzania:

Sr. J. W. S. Malecela
 Sr. S. Chale (en Addis Abeba)
 Sr. Ahmad Diria-Hassan (en El Cairo)
 Sr. Mohammad Ali Fourn

Sierra Leona:

Sr. G. B. O. Collier
 Sr. G. E. O. Williams

Siria:

Sr. Rafic Jouejati

Túnez:

Sr. Moncef Kedadi

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

Sr. P. F. Shakhov
 Sr. A. V. Grodsky
 Sr. I. G. Neklessa
 Sr. G. I. Vekilov

Venezuela:

Sr. Leonardo Díaz González
 Sr. Rafael Osuna (en Dar es Salaam, Mogadiscio, Addis Abeba y El Cairo)

Yugoslavia:

Sr. Dimitar Janevski

CAPÍTULO III

RHODESIA DEL SUR

PARTE I*

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL, EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA ASAMBLEA GENERAL EN 1965

1. El 22 de abril de 1965, el Comité Especial aprobó una resolución (A/6000/Rev.1¹, cap. III, párr. 292) en la que, además de hacer varias recomendaciones a la Potencia administradora, señaló a la atención inmediata del Consejo de Seguridad la grave situación reinante en Rhodesia del Sur.

2. En sus sesiones 1194a., 1195a., 1197a., 1199a., 1201a. y 1202a., celebradas entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1965, el Consejo de Seguridad examinó una carta de fecha 22 de abril de 1965², de los representantes de 35 Estados africanos en la que se pedía al Consejo que examinase la gravísima situación existente en Rhodesia del Sur.

3. En su 1202a. sesión, celebrada el 6 de mayo de 1965, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 202 (1965) por 7 votos contra ninguno y 4 abstenciones (Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). La parte dispositiva de esa resolución dice:

"[El Consejo de Seguridad]

"1. Toma nota de la declaración hecha el 27 de octubre de 1964 por el Gobierno del Reino Unido estableciendo las condiciones en que Rhodesia del Sur podría alcanzar la independencia;

"2. Toma nota asimismo y aprueba el deseo, expresado por la mayoría del pueblo de Rhodesia del Sur, de que el Reino Unido convoque una conferencia constitucional;

"3. Pide al Gobierno del Reino Unido y a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no aceptaran una declaración unilateral de indepen-

dencia de Rhodesia del Sur hecha por el gobierno minoritario;

"4. Pide al Reino Unido que haga todo lo posible para impedir una declaración unilateral de independencia;

"5. Pide al Gobierno del Reino Unido que no transfiera en ningún caso a su colonia de Rhodesia del Sur, mientras siga el sistema actual de gobierno, ninguno de los poderes o atributos de la soberanía, y que promueva la independencia del país con un sistema democrático de gobierno que responda a las aspiraciones de la mayoría del pueblo;

"6. Pide además al Gobierno del Reino Unido que inicie consultas con todos los interesados para convocar una conferencia de todos los partidos políticos a fin de establecer nuevas disposiciones constitucionales aceptables para la mayoría del pueblo de Rhodesia con el fin de fijar la fecha más próxima posible para la independencia;

"7. Decide mantener en su orden del día la cuestión de Rhodesia del Sur."

4. En las reuniones celebradas en Africa, el Comité Especial aprobó otras dos resoluciones relativas a Rhodesia del Sur (*ibid.*, párrs. 471 y 513), así como una resolución general relativa a la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en los territorios del Africa meridional (*ibid.*, cap. II, párr. 463).

5. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó, por recomendación de la Cuarta Comisión, tres resoluciones sobre la cuestión de Rhodesia del Sur.

6. El 12 de octubre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2012 (XX), cuya parte dispositiva dice así:

"[La Asamblea General]

"1. Condena toda tentativa por parte de las autoridades de Rhodesia del Sur para adquirir la independencia por medios ilegales con objeto de perpetuar el gobierno minoritario en Rhodesia del Sur;

"2. Declara que la perpetuación de tal gobierno minoritario sería incompatible con el principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos, enunciados en la Carta de las Na-

* Publicada anteriormente con la signatura A/6300/Add.1 (parte I).

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

² Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1965, documento S/6294 y Add.1.

ciones Unidas y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 (XV), aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960;

"3. *Pide* al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a todos los Estados Miembros que no acepten ninguna declaración de independencia para Rhodesia del Sur formulada por las actuales autoridades, que redundaría exclusivamente en beneficio de la minoría, ni reconozcan autoridad alguna que se diga emanada de tal declaración;

"4. *Invita* al Reino Unido a que emplee todos los medios posibles para impedir una declaración unilateral de independencia y a que, de producirse tal declaración, adopte todas las medidas necesarias para poner fin inmediatamente a la rebelión, con miras al traspaso de los poderes a un gobierno representativo de conformidad con las aspiraciones de la mayoría de la población;

"5. *Decide* mantener el estudio de la cuestión de Rhodesia del Sur durante el vigésimo período de sesiones con carácter permanente y urgente, y examinar qué otras medidas podrían ser necesarias."

7. El 5 de noviembre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2022 (XX), cuya parte dispositiva dice así:

"[*La Asamblea General*]

"1. *Aprueba* los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales relativos a Rhodesia del Sur y hace suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuran;

"2. *Reafirma* el derecho del pueblo de Rhodesia del Sur a la libertad y la independencia y reconoce la legitimidad de su lucha por el disfrute de sus derechos, tal como se hallan enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"3. *Advierte* solemnemente a las actuales autoridades de Rhodesia del Sur y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en calidad de Potencia administradora, que las Naciones Unidas se opondrán a cualquier declaración de independencia que no se base en el sufragio universal de los adultos;

"4. *Condena* la política de discriminación racial y segregación que se practica en Rhodesia del Sur y que constituye un crimen contra la humanidad;

"5. *Condena* cualquier apoyo o asistencia prestados por cualquier Estado al régimen minoritario de Rhodesia del Sur;

"6. *Exhorta* a todos los Estados a que se abstengan de dar cualquier tipo de asistencia al régimen minoritario de Rhodesia del Sur;

"7. *Insta* a la Potencia administradora a que decida inmediatamente:

"a) La liberación de todos los presos, detenidos y confinados políticos;

"b) La derogación de toda la legislación represiva y discriminatoria y en particular de la *Law*

and Order (Maintenance) Act y la *Land Apportionment Act*;

"c) La supresión de todas las restricciones a la actividad política de los africanos y el establecimiento de la libertad democrática completa y de la igualdad de derechos políticos;

"8. *Pide una vez más* al Gobierno del Reino Unido que suspenda la Constitución de 1961 y convoque inmediatamente una conferencia constitucional en la que participen representantes de todos los partidos políticos, a fin de establecer nuevas disposiciones constitucionales basadas en el sufragio universal de los adultos y fijar la fecha más próxima posible para la independencia;

"9. *Hace un llamamiento* a todos los Estados para que se opongan por todos los medios de que dispongan a una declaración unilateral de independencia y, en cualquier caso, para que no reconozcan a ningún gobierno de Rhodesia del Sur que no sea representativo de la mayoría de la población;

"10. *Requiere* de todos los Estados que presten asistencia material y moral al pueblo de Zimbabwe en su lucha por la libertad y la independencia;

"11. *Invita* al Gobierno del Reino Unido a emplear todas las medidas necesarias, inclusive la fuerza militar, para aplicar los párrafos 7 y 8 *supra*;

"12. *Señala a la atención* del Consejo de Seguridad las amenazas hechas por las actuales autoridades de Rhodesia del Sur, en especial la amenaza de sabotaje económico contra los Estados africanos independientes contiguos a Rhodesia del Sur;

"13. *Señala asimismo a la atención* del Consejo de Seguridad la situación explosiva existente en Rhodesia del Sur, que constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y decide transmitir al Consejo las actas y resoluciones del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General sobre esta cuestión;

"14. *Decide* proseguir de modo urgente y continuo el examen de la cuestión de Rhodesia del Sur."

8. En una nota de fecha 12 de noviembre de 1965, el Secretario General transmitió el texto de la resolución 2022 (XX) a los Estados y señaló especialmente a su atención los párrafos 6, 9 y 10 de la parte dispositiva de esa resolución.

9. El 11 de noviembre de 1965, inmediatamente después de hecha la declaración ilegal de independencia, la Asamblea General aprobó la resolución 2024 (XX), cuya parte dispositiva dice:

"[*La Asamblea General*]

"1. *Condena* la declaración unilateral de independencia proclamada por la minoría racista en Rhodesia del Sur;

"2. *Invita* al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que aplique inmediatamente las resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para poner fin a la rebelión de las autoridades ilegales de Rhodesia del Sur;

"3. *Recomienda* al Consejo de Seguridad que proceda con urgencia al examen de esa situación."

10. El Consejo de Seguridad volvió a considerar la situación de Rhodesia del Sur en sus sesiones 1257a. 2

1265a., celebradas entre el 12 y el 20 de noviembre de 1965.

11. En su 1258a. sesión, celebrada el 12 de noviembre de 1965, el Consejo de Seguridad aprobó por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (Francia) la resolución 216 (1965). Esa resolución dice lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad"

"1. *Decide condenar* la declaración unilateral de independencia proclamada por una minoría racista de Rhodesia del Sur;

"2. *Decide pedir encarecidamente* a todos los Estados que no reconozcan este régimen de una minoría racista de Rhodesia del Sur y que se abstengan de prestar asistencia a ese régimen ilegal."

12. En su 1265a. sesión, celebrada el 20 de noviembre de 1965, el Consejo de Seguridad aprobó, por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (Francia), otra resolución, 217 (1965), cuya parte dispositiva dice así:

"[El Consejo de Seguridad]"

"1. *Determina* que la situación originada por la proclamación de independencia hecha por las autoridades ilegales de Rhodesia del Sur es extremadamente grave, que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debe ponerle fin y que su continuación en el tiempo constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales;

"2. *Reafirma* su resolución 216 (1965) de 12 de noviembre de 1965 y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960;

"3. *Condena* la usurpación del poder por una minoría racista de colonos en Rhodesia del Sur y considera que la declaración de independencia por esa minoría no tiene validez jurídica;

"4. *Exhorta* al Gobierno del Reino Unido a que aplaste esta rebeldía de la minoría racista;

"5. *Exhorta asimismo* al Gobierno del Reino Unido a que tome todas las demás medidas apropiadas que resulten eficaces para eliminar la autoridad de los usurpadores y poner fin inmediatamente al régimen de la minoría en Rhodesia del Sur;

"6. *Encarece* a todos los Estados que no reconozcan esa autoridad ilegal ni mantengan relaciones diplomáticas o de otra índole con ella;

"7. *Encarece* al Gobierno del Reino Unido que, habiendo quedado fuera de uso la Constitución de 1961, tome medidas inmediatas para que el pueblo de Rhodesia del Sur pueda determinar su propio porvenir de conformidad con los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"8. *Encarece* a todos los Estados que se abstengan de todo acto que pueda ayudar a alentar al régimen ilegal y, en particular, se abstengan de suministrar armas, equipo y material militar y que hagan lo posible para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur, incluso establecer el embargo sobre el petróleo y sus productos;

"9. *Encarece* al Gobierno del Reino Unido que aplique urgente y decididamente todas las medidas que ha anunciado, así como las mencionadas en el párrafo 8 *supra*;

"10. *Encarece* a la Organización de la Unidad Africana que haga cuanto esté en su poder por ayu-

dar en la ejecución de la presente resolución, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas;

"11. *Decide* seguir estudiando la cuestión a fin de examinar las demás medidas que considere necesarias a ese respecto."

13. Por nota de fecha 29 de noviembre de 1965, el Secretario General transmitió el texto de la resolución 217 (1965) a los Estados y señaló especialmente a su atención los párrafos 6 y 8 de la parte dispositiva.

14. Al 30 de abril de 1966, se habían recibido respuestas de 66 Estados a las notas por las que el Secretario General había transmitido las resoluciones anteriormente mencionadas. Las respuestas se distribuyeron como documentos de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad o de ambos órganos, y se enumeran en la siguiente lista⁸:

	<i>Asamblea General Signatura del documento</i>	<i>Consejo de Seguridad Signatura del documento</i>
Albania	A/6116	S/6972
Alemania, República Federal de		S/7181 S/7218
Alto Volta	A/6288	S/7094
Argentina	A/6239 y Add.1	y Add.1
Australia	A/6244/ Rev.1	S/7104
Austria	A/6251	S/7115
Bélgica	A/6231 A/6271	S/7052 S/7161
Brasil	A/6256	S/7122
Bulgaria	A/6255	S/7121
Burundi	A/6249	S/7113
Camerún	A/6286	S/7214
Canadá	A/6234 A/6272	S/7082 S/7164
Ceilán	A/6269	S/7157
Colombia	A/6247	S/7112
Congo (República Democrática del) ..	A/6275	S/7177
Cuba	A/6112	S/6961
Checoslovaquia	A/6110 A/6273	S/7167
Chile	A/6297	S/7234
China	A/6258	S/7130
Chipre	A/6241	S/7099
Dinamarca	A/6153	S/7005
Ecuador	A/6291	S/7226
Estados Unidos de América	A/6236 y Add.1	S/7088 y Add.1 S/7170 y Add.1

⁸ Para los documentos de la Asamblea enumerados en la lista, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos*, tema 23 del programa (documentos A/6105 a A/6170); e *ibid.*, *vigésimo primer período de sesiones, Anexos*, tema 23 del programa (documentos A/6231 a A/6324). Para los documentos del Consejo de Seguridad, véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965* (documentos S/6923 a S/7055); *ibid.*, *vigésimo primer año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966* (documentos S/7056 a S/7228); e *ibid.*, *Suplemento de abril, mayo y junio de 1966* (documentos S/7234 a S/7258).

	Asamblea General Signatura del documento	Consejo de Seguridad Signatura del documento
Filipinas	A/6293	S/7228
Finlandia	A/6243	S/7101
Grecia		S/6986
Guinea	A/6263	S/6923
		S/7140
Haití	A/6253	S/6951
		S/7119
Hungría	A/6268	S/7156
India	A/6237	S/6959
		S/7092
Irak		S/7056
Irán		S/6971
Irlanda	A/6259	S/7132
Israel		S/6930
		S/7083
Italia		S/7016
		S/7048
Jamaica		S/6969
Japón	A/6133	S/6990
	A/6248	S/7114
Jordania	A/6254	S/7120
Liberia	A/6257	S/7124
Libia	A/6266	S/7144
Luxemburgo		S/7055
		S/7160
Madagascar	A/6285	S/7213
Malasia	A/6290	S/7225
Mongolia	A/6270	S/6943
		S/7159
Nicaragua		S/7139
Nigeria		S/6966
		S/7153
Noruega	A/6155	S/7008
Nueva Zelandia	A/6238	S/7093
Países Bajos		S/7046
		S/7162
Pakistán		S/7127
Polonia	A/6235	S/7087
	y Add.1	y Add.1
Reino Unido		S/7021
		S/7108
República Árabe Uni- da	A/6281	S/7187
República Dominica- na	A/6264	S/6979
		S/7141
RSS de Bielorrusia..		S/7053
RSS de Ucrania ...	A/6245	S/7110
Rumania	A/6170	S/7015
Rwanda	A/6260	S/7135
Singapur	A/6282	S/7188
Suecia	A/6156	S/7010
		S/7012
Trinidad y Tabago..		S/6946
Uganda		S/6924
URSS	A/6105	S/6940
	A/6232	S/7068
	y Add.1	y Add.1
Venezuela	A/6231	S/7253
Yemen	A/6252	S/7118
Yugoslavia	A/6265	S/6942
		S/7143

15. De las respuestas recibidas se desprende que se han cumplido considerablemente las resoluciones relativas a la cuestión de Rhodesia del Sur. En todas las respuestas se declara concretamente que los Estados interesados no han reconocido el régimen ilegal ni mantendrán relaciones con él. Las respuestas muestran también que esos Estados han prohibido explícita o implícitamente las exportaciones de armas, equipo y material militar a Rhodesia del Sur. El embargo sobre el petróleo y sus productos también ha sido apoyado específicamente en las respuestas de los países productores y los países exportadores de petróleo; asimismo, ha sido apoyado en general, directa o indirectamente, en las respuestas de otros Estados.

16. En muchas respuestas se indica que ha habido una ruptura total de relaciones económicas con Rhodesia del Sur, pero algunas otras muestran que las relaciones económicas se van suprimiendo gradualmente, mediante la prohibición del comercio en determinados productos según se ha anunciado de tiempo en tiempo desde la declaración ilegal de independencia.

B. INFORMACIÓN RELATIVA AL TERRITORIO

Generalidades

17. La información relativa a Rhodesia del Sur, así como una reseña de las medidas adoptadas respecto de ese Territorio, ya figuran en los informes anteriores del Comité Especial a la Asamblea General*. A continuación se presenta información complementaria sobre los hechos ocurridos a partir de entonces.

Acontecimientos políticos

Declaración del Gobierno del Reino Unido sobre sus conversaciones con el Gobierno de Rhodesia del Sur

18. El 25 de mayo de 1965 la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* hizo una declaración según la cual, habiendo finalizado las elecciones en Rhodesia del Sur, el Gobierno del Reino Unido se proponía estudiar todas las posibilidades de negociar un arreglo de las cuestiones constitucionales planteadas entre Rhodesia del Sur y el Reino Unido. En la declaración se decía también que las opiniones del Gobierno del Reino Unido respecto de las negociaciones se estaban poniendo en conocimiento del Primer Ministro Ian Smith por conducto del Alto Comisionado del Reino Unido en Salisbury.

La Conferencia de Primeros Ministros del Commonwealth y Rhodesia del Sur

19. Del 17 al 25 de junio de 1965 tuvo lugar en Londres una Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth*. En el comunicado final de la Conferencia, los Jefes de Gobierno de los países del *Commonwealth* reafirmaron que se oponían irrevocablemente a toda declaración unilateral de independencia por el Go-

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséxtimo período de sesiones, Anexos, tema 97 del programa, documento A/5124; *ibid.*, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del programa, documento A/5238, cap. II; *ibid.*, decimoctavo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1, cap. III, apéndice; *ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I), documento A/5800/Rev.1, cap. III; e *ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/6000/Rev.1, cap. III.

bierno de Rhodesia del Sur y, además, reafirmaron su insistencia, en relación con ese país, en el principio del gobierno por la mayoría. Según el comunicado, los Primeros Ministros instaron también al Primer Ministro del Reino Unido a que convocase en breve plazo, posiblemente dentro de tres meses, a una conferencia constitucional a la que tendrían libre acceso todos los dirigentes políticos de Rhodesia del Sur, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la independencia basada en el gobierno por la mayoría. Además, se instaba al Gobierno del Reino Unido a que si el Gobierno de Rhodesia del Sur se negaba a asistir a tal conferencia y a poner en libertad a los detenidos, promulgase la legislación necesaria para suspender la vigencia de la Constitución de 1961 y nombrar un gobierno interino, el cual debería derogar las leyes opresivas y discriminatorias y preparar el camino para la celebración de elecciones libres.

20. Según el comunicado, el Gobierno del Reino Unido informó a la Conferencia que estaba celebrando activas discusiones con el Gobierno de Rhodesia del Sur y que, durante el proceso de tratar de llegar a un acuerdo sobre el progreso de Rhodesia del Sur hacia la independencia, la celebración de una conferencia constitucional en el momento adecuado constituiría una medida natural.

21. El 28 de junio de 1965, el Primer Ministro de Rhodesia del Sur envió un mensaje al Primer Ministro del Reino Unido manifestando que la conferencia constitucional recomendada en el comunicado era innecesaria e impropia y que, si se convocaba a una conferencia de esa índole, no asistirían a la misma ni el Gobierno de Rhodesia del Sur ni ninguna persona de ese país. Declaró además en su mensaje que, si el Gobierno del Reino Unido intentaba promover tal conferencia, su Gobierno interpretaría esa tentativa como una injerencia en los asuntos internos de Rhodesia del Sur.

Visita a Rhodesia del Sur por el Ministro de Estado del Reino Unido para las Relaciones con el Commonwealth

22. El 18 de julio de 1965, el Secretario de Estado para las Relaciones con el Commonwealth respondió a la invitación que le hizo el Primer Ministro Smith para que visitase Rhodesia del Sur a fin de celebrar nuevas conversaciones. En su mensaje, el Secretario de Relaciones con el Commonwealth manifestó que anhela que estas negociaciones continuasen sin demora en el plano ministerial. Sin embargo, dado que no podría trasladarse a Salisbury con la rapidez que deseaba, se proponía enviar a Rhodesia del Sur, en calidad de representante suyo, al Sr. Cledwyn Hughes, Ministro de Estado para las Relaciones con el Commonwealth, a fin de que investigase otras posibilidades de llegar a un acuerdo con el Sr. Smith.

23. El Sr. Cledwyn Hughes visitó Rhodesia del Sur del 21 al 27 de julio de 1965 para sostener conversaciones con el Gobierno de dicho país. El 25 de julio de 1965, el Sr. Ian Smith publicó una declaración en la que volvió a dar seguridades a sus partidarios de que en sus negociaciones con el Sr. Hughes no estaba apartándose de ningún principio. En la declaración, que fue emitida por conducto del Presidente del Rhodesia Front, se decía además que, ya fuese que la independencia se lograra o no mediante negociaciones, sería una independencia sin condiciones. El 30 de julio

de 1965, el Sr. Smith describió las conversaciones como confidenciales, aunque también se citaron palabras suyas al efecto de que Rhodesia del Sur había hecho propuestas concretas sobre la cuestión de la independencia y estaba aguardando la reacción del Gobierno del Reino Unido respecto de las conversaciones. El 2 de agosto de 1965, el Sr. Smith formuló un nuevo comentario sobre la visita del Sr. Hughes a Rhodesia del Sur. Según este despacho, dijo que el Gobierno estaba tratando desesperadamente de hacer negociaciones, pero que de no lograrlo sólo quedaba un camino para obtener la independencia, a saber, pasar a la acción directa.

24. Al regresar al Reino Unido, el Sr. Hughes comunicó al Sr. Arthur Bottomley, Secretario de Relaciones con el Commonwealth, una invitación del Sr. Smith para que hiciese una nueva visita a Rhodesia del Sur a fin de proseguir las conversaciones. En septiembre de 1965, el Sr. Bottomley y el Sr. Smith cambiaron mensajes relacionados con la continuación de las conversaciones sobre la cuestión de la independencia.

Visita del Sr. Ian Smith a Londres

25. El 30 de septiembre de 1965, el Sr. Smith anunció que visitaría el Reino Unido para realizar negociaciones con el Gobierno del Reino Unido sobre la cuestión de la independencia. En su anuncio manifestó que se había expresado claramente al Gobierno del Reino Unido que, dado que las negociaciones sobre la independencia se habían prolongado penosamente por más de dos años, las conversaciones debían ser definitivas y concluyentes. El 1º de octubre de 1965, el Sr. Smith declaró que había decidido ir al Reino Unido porque, si bien el Sr. Bottomley, Secretario de Relaciones con el Commonwealth, había convenido en ir a Rhodesia del Sur para realizar conversaciones, no podría hacerlo hasta mediados de octubre y que para el Sr. Smith el plazo de espera era excesivamente largo. Como, de todas maneras, todo acuerdo entre él y el Sr. Arthur Bottomley requeriría la aprobación del Primer Ministro del Reino Unido, había decidido ir al Reino Unido para poder hacer un llamamiento personalmente al Primer Ministro del Reino Unido, si fallaban las negociaciones. También se informó que el Sr. Smith había declarado que, si regresaba del Reino Unido sin haber logrado resultados, él y su Gobierno deberían encarar la cuestión de declarar la independencia unilateralmente. Manifestó además que, hiciera lo que hiciera el Gobierno del Reino Unido, Rhodesia del Sur sería independiente para la Navidad de 1965.

26. El Sr. Smith visitó Londres del 4 al 11 de octubre de 1965, y celebró reuniones sobre la cuestión de la independencia con el Sr. Arthur Bottomley, Secretario de Relaciones con el Commonwealth, y con el Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Harold Wilson. El 8 de octubre de 1965, después de su tercera reunión con el Primer Ministro del Reino Unido, el Sr. Smith manifestó a los periodistas que no había hecho concesión alguna.

Declaración formulada el 9 de octubre de 1965 por la Oficina de Relaciones con el Commonwealth

27. El 9 de octubre de 1965, la Oficina de Relaciones con el Commonwealth publicó una declaración re-

lativa a las conversaciones con el Sr. Smith. En la declaración se reiteró que la posición del Gobierno del Reino Unido con respecto a la independencia de Rhodesia del Sur era, según se le había expresado al Sr. Smith, la siguiente:

1) Deberían mantenerse y garantizarse el principio y la intención, ya incorporado en la Constitución de 1961, de realizar un avance sin obstáculos hacia el gobierno por la mayoría.

2) También deberían establecerse garantías contra las modificaciones retrogresivas de la Constitución.

3) Debería mejorarse inmediatamente la condición política de la población africana.

4) Deberían realizarse progresos hacia la eliminación de la discriminación racial.

5) El Gobierno británico debería ser convencido de que toda base propuesta para la independencia era aceptable para todo el pueblo de Rhodesia del Sur. En la declaración también se resumieron las opiniones del Sr. Ian Smith sobre estos cinco principios, en los siguientes términos:

i) La Constitución de 1961 disponía, en los requisitos para el sufragio, el aumento constante del número de africanos con derecho a votar; en lo referente a la cuestión de establecer garantías contra retrogresiones se trataba, fundamentalmente, de establecer un mecanismo adecuado.

ii) El Gobierno de Rhodesia del Sur proponía la adición de un Senado (integrado por 12 jefes elegidos por el Consejo de Jefes) que votaría con la Asamblea en tercera lectura sobre cualquier cuestión que afectase la revisión de las cláusulas reservadas. Esto reemplazaría al procedimiento de referéndum previsto en virtud de la Constitución de 1961.

iii) El Gobierno de Rhodesia del Sur declaró que su propuesta de establecer un Senado integrado por 12 jefes africanos representaría un importante adelanto para los africanos. El Gobierno de Rhodesia del Sur no podía considerar ninguna posibilidad de aumentar el número de representantes africanos en la Asamblea, mientras tantos africanos rechazaban las oportunidades ofrecidas con arreglo a la presente Constitución; no obstante estaba dispuesto a estudiar la ampliación de la lista electoral B, por ejemplo, admitiendo a todos los contribuyentes.

iv) El Gobierno de Rhodesia del Sur declaraba que deseaba que se pusiera fin a la discriminación racial mediante un proceso evolutivo, pero que no podía aceptar la derogación de la *Land Apportionment Act*.

v) El Gobierno de Rhodesia del Sur afirmaba que ya había demostrado que la mayoría de la población de Rhodesia del Sur deseaba la independencia basada en la Constitución de 1961. Esto lo habían mostrado las consultas de la opinión tribal y el referéndum del electorado.

28. De acuerdo con la declaración de la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*, el Gobierno del Reino Unido no estimaba que estas propuestas aportasen ningún adelanto positivo para los africanos y, por consiguiente, había llegado a la conclusión de que no existía base alguna para que el Gobierno del Reino Unido considerase justificado otorgar la independencia a Rhodesia del Sur. En la declaración se reiteraba asimismo la advertencia hecha por el Gobierno del Reino

Unido, acerca de las graves consecuencias que tendría una declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno de Rhodesia del Sur.

29. El 11 de octubre de 1965, el Primer Ministro Wilson celebró otra reunión con el Sr. Smith para tratar de romper el estancamiento sobre la cuestión de la independencia. Después de dicha reunión, el Sr. Smith declaró que no se había producido cambio alguno en sus respectivas posiciones sobre la cuestión.

Correspondencia relativa a la reanudación de las conversaciones

30. El 12 de octubre de 1965, el Primer Ministro Wilson envió un mensaje al Sr. Smith, en Rhodesia del Sur, en el que sugería la posibilidad de enviar a Rhodesia del Sur una misión integrada por Primeros Ministros principales del *Commonwealth* y presidida por el Sr. Robert Menzies, el anterior Primer Ministro de Australia, para que buscara los medios de salir del estancamiento respecto a la cuestión de la independencia. El 18 de octubre de 1965 el Sr. Smith rechazó la sugerencia de que se enviase tal misión, alegando que el *Commonwealth* no tenía jurisdicción en lo concerniente a Rhodesia del Sur. En la misma fecha, el Primer Ministro Harold Wilson respondió al mensaje del Sr. Smith diciendo, entre otras cosas, que el Gobierno del Reino Unido seguía dispuesto a estudiar cualesquiera nuevas ideas para obtener un acuerdo entre los dos Gobiernos.

31. El 20 de octubre de 1965, el Sr. Smith respondió al pedido del Sr. Wilson sugiriendo que el Gobierno del Reino Unido concediese la independencia a Rhodesia del Sur y confiase a su Gobierno la observación y el cumplimiento de los principios de la Constitución de 1961. Con este fin, ofreció regirse por un tratado destinado a garantizar estos principios. Declaró además que si se violaba tal tratado el Gobierno del Reino Unido podría adoptar cualesquiera medidas que juzgase convenientes.

32. Partiendo de la base de la propuesta del Sr. Smith relativa al tratado, el Primer Ministro Wilson ofreció, el 21 de octubre de 1965, trasladarse en avión a Rhodesia del Sur para celebrar nuevas conversaciones sobre la cuestión de la independencia.

Visita del Primer Ministro del Reino Unido a Rhodesia del Sur

33. El Primer Ministro Wilson, acompañado por el Sr. Bottomley, Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*, visitó Rhodesia del Sur del 25 al 30 de octubre de 1965 para celebrar nuevas conversaciones sobre la cuestión de la independencia. Posteriormente se les unió Sir Elwyn Jones, Fiscal del Reino Unido.

34. Durante su estadía en Rhodesia del Sur, el Primer Ministro Wilson celebró reuniones con el Sr. Smith y sus asesores, así como con el Jefe de la Oposición, Sr. Josiah Gondo, otros miembros del United Peoples Party, una delegación del Consejo Provincial de Jefes, miembros independientes del Parlamento, el Sr. Garfield Todd (ex Primer Ministro, que se encuentra actualmente confinado) y miembros de la comunidad asiática. También conversó con el Sr. Joshua Nkomo, dirigente de la organización proscrita Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU), y con el Reverendo N. Sithole, dirigente de la organización proscrita Zim-

babwe African National Union (ZANU), quienes fueron trasladados en avión desde sus lugares de confinamiento expresamente para las conversaciones. Se calculó que, en total, el Primer Ministro Wilson sostuvo conversaciones con 126 dirigentes y personas representativas de Rhodesia del Sur.

Propuesta de nombrar una Comisión Real

35. En sus conversaciones con miembros del Gobierno de Rhodesia del Sur, el Primer Ministro Wilson hizo hincapié en las calamitosas consecuencias que tendría una toma ilegal del poder, y le hizo dos propuestas. La primera consistía en que la aseveración del Sr. Smith, de que el pueblo de Rhodesia — con inclusión de una mayoría de africanos — deseaba la independencia basada en la Constitución de 1961, fuese puesta a prueba mediante un referéndum de la totalidad del pueblo o bien del electorado actual más todos los contribuyentes africanos. La segunda era establecer una Comisión Real, encabezada por el Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur, para que recomendase modificaciones de la Constitución de 1961 que ofrecieran la base sobre la cual Rhodesia del Sur pudiera independizarse lo antes posible, dieran efectividad a los cinco principios enunciados por el Gobierno del Reino Unido, y que fuesen aceptables para la población de Rhodesia del Sur en su totalidad.

36. El Gobierno de Rhodesia del Sur no aceptó ninguna de las propuestas y, en cambio, propuso que una Comisión Real encabezada por el Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur, con otros dos miembros designados respectivamente por los Gobiernos de Rhodesia del Sur y del Gobierno del Reino Unido, y trabajando sobre la base de un informe unánime, recibiese de ambos Gobiernos un proyecto convenido de arreglo para la independencia, basado en la Constitución de 1961, con las modificaciones que pudiesen juzgarse necesarias, y luego procediese a determinar si tal documento sería aceptable para el conjunto del pueblo de Rhodesia.

37. El Sr. Wilson aceptó esta propuesta, pero se reservó el derecho de retornar al concepto original de las atribuciones y deberes de la comisión, si la comisión no lograba llegar a un acuerdo. Además, opinó que la comisión debería presentar un informe provisional sobre los métodos que la misma recomendaría para consultar la opinión del pueblo de Rhodesia en su totalidad. Sin embargo, quedaron en pie importantes diferencias entre los dos Gobiernos con respecto a qué modificaciones debían introducirse en la Constitución de 1961.

Declaración formulada por el Primer Ministro del Reino Unido acerca de su visita a Rhodesia del Sur

38. Al presentar el informe al Parlamento el 1º de noviembre, después de su regreso a Londres, el Sr. Wilson manifestó que ni mediante el mayor esfuerzo de la imaginación podría decirse que los jefes podrán representar a la población africana en su totalidad, ni que el Gobierno del Reino Unido podía dejar, sin adoptar medidas de salvaguardia, una situación que permitiría que un parlamento independiente de Rhodesia del Sur, sin controles ni trabas constitucionales, redujera el número de puestos de la lista electoral "B" o aumentara el número de los de la lista electoral "A" y, por consiguiente, postergara el gobierno por la mayoría.

39. Refiriéndose a sus conversaciones en Salisbury con los dirigentes africanos, el Sr. Harold Wilson declaró:

"... Debo decir a la Cámara que en mis conversaciones con los dirigentes nacionalistas africanos, y con miembros africanos del Parlamento y otros que no lo son, elegidos según la lista "B", aclaré, con franqueza absoluta, tres cosas. En primer término, consideré que era mi deber alejar de sus mentes toda esperanza que pudieran abrigar de que los problemas constitucionales de Rhodesia iban a resolverse mediante una demostración de poderío militar por nuestra parte — ya fuera con el propósito de suspender o enmendar la Constitución de 1961, de imponer el gobierno de la mayoría al día siguiente o en cualquier otro momento — o respecto de lo relacionado con la situación que podría seguir a una declaración ilegal de independencia.

"... En segundo término, dije que aunque los sucesivos gobiernos británicos están profunda e irrevocablemente comprometidos a lograr un progreso garantizado y libre de estorbos hacia el gobierno de la mayoría, el Gobierno británico, de por sí, aunque el Parlamento británico tenga el poder jurídico para otorgar la independencia, no cree que en la trágica y dividida situación actual de Rhodesia, ese gobierno de la mayoría pueda o deba lograrse hoy, o mañana.

"... En tercer término, los insté a unir las fuerzas de la opinión africana, ahora amargamente divididas, a elaborar la constitución de Rhodesia en una forma constitucional, y a persuadir a sus simpatizantes de que se registren y voten."

Oferta de poner a prueba la aceptabilidad de las propuestas de Rhodesia del Sur

40. El 3 de noviembre, el Primer Ministro Wilson informó al Parlamento de que, no obstante las nuevas conversaciones entre el Secretario de Relaciones con el *Commonwealth* y el Fiscal de la Corona (quienes habían retardado su salida de Salisbury) y el Gobierno de Rhodesia del Sur, no había perspectivas de que se llegase a un acuerdo sobre las enmiendas que se harían en la Constitución de 1961 como base utilizable para la Comisión Real. En vista de esto, el actual Gobierno del Reino Unido, aunque sin apartarse de la posición asumida por sus predecesores — de estar dispuestos a tomar en cuenta cualesquiera opiniones que expresase libremente la población sobre los problemas pertinentes, pero reservándose su posición — accedió, con sujeción a ciertas condiciones, que se pusiera a prueba la aceptabilidad para todo el pueblo de Rhodesia de las propuestas del Gobierno de Rhodesia.

41. Las condiciones consistían en que se debía informar que el Gobierno del Reino Unido no estaba de acuerdo con dichas propuestas, que antes de consultar la opinión de la población de Rhodesia del Sur la Comisión Real debería someter a la aprobación de ambos Gobiernos un informe unánime acerca del método que propondría para determinar la aceptabilidad, y que una vez que hubiesen determinado la opinión del pueblo de Rhodesia del Sur, la Comisión debería presentar un informe aprobado unánimemente por sus miembros. El Gobierno del Reino Unido no podía comprometerse por anticipado a aceptar dicho informe, pues tendría que dejarse la decisión final al Parlamento británico.

42. Como alternativa, el Gobierno del Reino Unido estaba todavía dispuesto a aceptar que las propuestas del Gobierno de Rhodesia se sometiesen a la prueba de un referéndum de todo el pueblo de Rhodesia, realizado sin restricciones a la actividad política.

Reacción del Primer Ministro de Rhodesia del Sur a las propuestas del Gobierno del Reino Unido relativas a la Comisión Real

43. El 6 de noviembre de 1965, el Sr. Smith envió un mensaje al Sr. Wilson en el que declaraba que Rhodesia del Sur no podía aceptar las propuestas del Gobierno del Reino Unido relativas a una Comisión Real, en la forma en que se la describía en la declaración hecha por el Sr. Wilson ante el Parlamento el 3 de noviembre de 1965.

Acontecimientos internos en Rhodesia del Sur

44. El 18 de octubre de 1965 el Gobierno de Rhodesia del Sur dictó una orden de confinamiento de 12 meses contra el Sr. Garfield Todd, ex Primer Ministro de Rhodesia del Sur, de quien se dice que es defensor de los derechos africanos. El Sr. Todd fue confinado a su finca cuando se preparaba para partir al Reino Unido el 19 de octubre de 1965.

45. En la orden de confinamiento se declaraba que había motivos para creer que el Sr. Todd estaba activamente asociado con los dirigentes de una organización ilegal, la prohibida Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU), y que se había asociado activamente con actividades perjudiciales para el mantenimiento del orden público.

46. El 5 de noviembre de 1965, el Gobierno de Rhodesia del Sur declaró un estado de emergencia de tres meses en todo el país. El Sr. Desmond Lardner-Burke, Ministro de Justicia y Orden Público, formuló una declaración en la que decía que el estado de emergencia era necesario porque existía una amenaza a la seguridad en Rhodesia del Sur. A modo de explicación, se refería a lo que él llamaba las amenazas planteadas por muchos sabotadores adiestrados, a los que patrocinaban organizaciones nacionalistas africanas prohibidas que, según él, habían ya regresado al país. Afirmó también que muchos más sabotadores estaban adiestrándose en países hostiles a Rhodesia del Sur, y que algunos de estos sabotadores se encontraban ya en países situados al norte de Rhodesia del Sur, esperando instrucciones y la oportunidad de regresar al país. Sostuvo también que las declaraciones de ciertos países africanos representaban una amenaza a la seguridad y mantenimiento del orden público.

47. El 3 de noviembre de 1965, el Sr. John Wrathall, Ministro de Hacienda de Rhodesia del Sur, anunció que se impondría un control de todas las importaciones a Rhodesia del Sur. En una declaración oficial se manifestó que la finalidad del control de las importaciones era estabilizar las reservas externas del país y mantener un nivel de importación comparable al de 1964.

48. Estos tres actos del Gobierno de Rhodesia del Sur dieron lugar a la creencia general de que era inminente la declaración unilateral de independencia por el Gobierno de Rhodesia del Sur. A su regreso del Reino Unido el 12 de octubre de 1965, el Primer Ministro Smith había declarado que había el 50% de po-

sibilidades de que Rhodesia del Sur sería independiente para la Navidad de 1965.

Nuevas tentativas de conversaciones

49. El 7 de noviembre de 1965, el Primer Ministro Wilson envió al Sr. Smith un mensaje pidiéndole que se reuniese con él en Malta para estudiar de nuevo el problema de Rhodesia del Sur. Sugería en su carta que Sir Hugh Beadle (Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur y Presidente designado de la propuesta Comisión Real), visitase primero Londres para estudiar las actividades de la Comisión a la luz del estado de emergencia recientemente declarado.

50. El 8 de noviembre de 1965, el Sr. Smith rechazó las propuestas del Reino Unido relativas a una Comisión Real. Informó al Sr. Wilson que las opiniones del Reino Unido y de Rhodesia del Sur acerca de la independencia eran inconciliables. Impugnó una afirmación hecha en la última carta del Sr. Wilson en el sentido de que sólo el Parlamento del Reino Unido podía conceder la independencia a Rhodesia del Sur, si bien el informe de la Comisión tendría en ello gran importancia. Dijo también que el Reino Unido había expresado claramente que no permitiría que la Comisión presentase un informe de mayoría, y que no recomendaría su aceptación en el Parlamento.

51. El Sr. Smith anunció ulteriormente que Sir Hugh Beadle, Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur y Presidente designado de la propuesta Comisión Real de tres personas, iría a Londres como lo sugería el Sr. Wilson. Precisó, sin embargo, que Sir Hugh iría únicamente por iniciativa propia. Sir Hugh llegó a Londres el 9 de noviembre de 1965 para iniciar las conversaciones con el Primer Ministro Wilson y el Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*, Sr. Bottomley.

Ultimos intercambios de comunicaciones

52. El Primer Ministro Wilson envió un nuevo mensaje al Sr. Smith el 10 de noviembre de 1965 en el que le preguntaba si, en el supuesto caso de que el Gobierno del Reino Unido decidiese recomendar al Parlamento un informe unánime de la Comisión Real que dijese que la Constitución de 1961 era aceptable a todo el pueblo de Rhodesia del Sur como base para la independencia, el Gobierno de Rhodesia del Sur estaría dispuesto a comprometerse paralelamente, en caso de que la Constitución de 1961 no fuese aceptable, a renunciar a su pretensión a este respecto y consentir en que una Comisión Real elaborase entonces una nueva constitución aceptable por la que se aplicasen los cinco principios.

53. En una declaración hecha ante la Cámara de los Comunes el 11 de noviembre, el Sr. Wilson dijo que había sostenido una última conversación por teléfono con el Sr. Smith varias horas antes de la declaración ilegal de independencia, en la que le había dicho que no quedaban puntos pendientes y que enviaba un Ministro de categoría superior a Salisbury para que firmase una minuta redactada de común acuerdo con base en la cual pudiera crearse esa semana la Comisión Real y ésta pudiera empezar sus trabajos. Empero, el Sr. Smith había seguido insistiendo en que las posiciones de los dos Gobiernos eran inconciliables.

El Sr. Ian Smith declara la independencia unilateralmente

54. El 11 de noviembre de 1965, el Sr. Ian Smith declaró la independencia unilateralmente. El anuncio figuró en una proclamación (véase el apéndice I) que el Sr. Smith dirigió por la radio al pueblo de Rhodesia del Sur.

55. En una declaración hecha después de leer la proclamación del Sr. Smith dijo que Rhodesia del Sur se mantendría fiel a la Constitución de 1961 que incluía actualmente las enmiendas necesarias para adaptarla a la de un país independiente. Rhodesia del Sur mantendría su lealtad a la Reina, la bandera nacional británica seguiría ondeando en Rhodesia del Sur, y se seguiría cantando el himno nacional. Dijo también que su nuevo régimen tenía el propósito, en consulta con los jefes, de integrar a los africanos en el "Gobierno" y en la "Administración", sobre una base que les fuese aceptable.

56. Terminó su declaración manifestando que Rhodesia del Sur había asumido su independencia soberana.

Exposición hecha por el Gobierno del Reino Unido sobre la declaración ilegal de independencia

57. El 11 de noviembre de 1965, el Primer Ministro Wilson hizo una exposición en el Parlamento del Reino Unido sobre la declaración ilegal de independencia de Rhodesia del Sur.

58. Declaró, entre otras cosas, que el Gobierno del Reino Unido condenaba la pretendida declaración de independencia del antiguo Gobierno de Rhodesia del Sur como un acto ilegal e inválido en derecho. Era un acto de rebelión contra la Corona y contra la Constitución establecida por ley, y toda medida encaminada a ponerla en práctica sería un acto de traición. Informó también al Parlamento que el Gobernador, con arreglo a la autoridad que le había conferido la Corona, había informado el 11 de noviembre de 1965 al Primer Ministro y a los demás Ministros del Gobierno de Rhodesia del Sur que cesaban en sus cargos. Eran actualmente ciudadanos particulares de Rhodesia del Sur y no podían ejercer ninguna autoridad legal. Declaró además que el Gobierno del Reino Unido no trataría con el régimen rebelde. Manifestó que se retiraba al Alto Comisionado del Reino Unido y que se había pedido al Alto Comisionado de Rhodesia del Sur en Londres que abandonase el país (el Primer Ministro anunció también sanciones financieras y económicas contra Rhodesia del Sur, de las cuales se trata en los párrafos 176 a 178 *infra*).

59. El Primer Ministro siguió diciendo que era deber de todos los súbditos británicos de Rhodesia del Sur, con inclusión de todos los ciudadanos de Rhodesia del Sur, permanecer leales a la Corona y reconocer la constante autoridad y responsabilidad del Gobierno del Reino Unido con respecto a Rhodesia del Sur.

60. El Primer Ministro Wilson también informó al Parlamento que la finalidad de las medidas tomadas por el Gobierno del Reino Unido contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur no era imponer un castigo, sino más bien restaurar el gobierno constitucional en Rhodesia del Sur. El 12 de noviembre de 1965 informó además al Parlamento que la única manera de llevar eso a cabo era poner fin al régimen rebelde haciendo impracticable dicho régimen y creando una si-

tuación en la que, lo antes posible, el pueblo de Rhodesia del Sur mismo deseara poner un gobierno legítimo en su lugar.

La Southern Rhodesia Act, 1965

61. El 16 de noviembre de 1965, el Parlamento del Reino Unido aprobó la ley denominada *Southern Rhodesia Act, 1965* (véase el apéndice II), que destaca la jurisdicción del Reino Unido sobre Rhodesia del Sur y otorga poderes al Gobierno para suspender, enmendar, revocar o hacer cualquiera adición a las disposiciones de la Constitución de Rhodesia del Sur de 1961. Dicha ley también da al Gobierno del Reino Unido la facultad de imponer sanciones y tomar cualesquiera otras medidas necesarias contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Autoriza asimismo al Gobierno a declarar inválida toda ley dictada por el régimen ilegal después de la declaración unilateral de independencia. La ley autoriza además al Gobierno del Reino Unido a dictar cualesquier *Orders in Council* (Reales Decretos) que parezcan necesarios o convenientes como consecuencia de la declaración ilegal de independencia. La ley dispone que estas *Orders* entrarán en vigor tan pronto como se dicten con sujeción a la aprobación del Parlamento, que debe obtenerse en un plazo de 28 días después de ser dictadas.

62. Inmediatamente después de la aprobación de la *Southern Rhodesia Act, 1965*, el Gobierno del Reino Unido dictó siete *Orders in Council* sobre Rhodesia del Sur, entre ellas las siguientes:

a) *Southern Rhodesia (Constitution) Order, 1965*

63. En virtud de los artículos 2 y 3 de este real decreto, son ilegales cualesquiera órdenes dictadas por el Sr. Ian Smith y el antiguo Gobierno de Rhodesia del Sur a partir de la declaración ilegal de independencia, y se otorga al Gobierno del Reino Unido un poder general para dictar leyes en beneficio de la paz, orden público y el buen gobierno de Rhodesia del Sur. Los artículos 4 a 6 de este real decreto también confiere poderes a un Secretario de Estado para que ejerza autoridad ejecutiva en Rhodesia del Sur conjuntamente con el Gobernador, en la medida en que el Gobernador esté en condiciones de ejercerla, o para que la ejerza directamente mediante decretos reales emanados del Reino Unido (véase el apéndice III).

64. La autoridad ejecutiva de un Secretario de Estado en virtud de esta *Order in Council* ha sido depositada en el Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*.

65. El Fiscal del Reino Unido, Sir Elwyn Jones, declaró en el Parlamento el 24 de noviembre de 1965 que este real decreto invalidaba por anticipado toda ley que la Asamblea Legislativa de Rhodesia del Sur tratase de aprobar, así como cualesquiera otra medida que pudiera tomar. Liberaba también al Gobernador de su obligación constitucional de obrar de acuerdo con el asesoramiento de los Ministros, y autorizaba al Gobierno del Reino Unido a ejercer diversas obligaciones de funcionarios o autoridades del Gobierno de Rhodesia del Sur o a controlar el ejercicio de tales funciones. El Fiscal del Reino Unido declaró también que el real decreto declaraba inválida la Constitución que el Sr. Ian Smith y sus colegas pretendían haber concedido a Rhodesia del Sur. Según el Fiscal, el real decreto autorizaba al Gobierno del Reino Unido a reservarse los poderes

constitucionales necesarios en Rhodesia del Sur, facultándolo así para resistir a cualquier tentativa encaminada a establecer otro gobierno.

b) *Southern Rhodesia (Fugitive Offenders Act, 1881) Order, 1965*

66. Este real decreto impide que los supuestos delincuentes fugitivos sean devueltos a Rhodesia del Sur, a menos que el Secretario del Interior considere procedente su devolución.

c) *Southern Rhodesia (British Nationality Act, 1948) Order, 1965*

67. En virtud de este decreto los ciudadanos leales de Rhodesia del Sur pueden obtener con más facilidad la ciudadanía del Reino Unido y las Colonias.

d) *Southern Rhodesia (Commonwealth Immigration Act, 1962) Order, 1965*

68. Este real decreto estipula que los habitantes de Rhodesia del Sur a quienes se conceden pasaportes de emergencia del Reino Unido no están por tal motivo exentos de las disposiciones de la *Commonwealth Immigrants Act*.

e) *Southern Rhodesia (Property in Passports) Order, 1965*

69. Este real decreto da a las autoridades de inmigración la facultad de confiscar pasaportes expedidos por autoridades ilegítimas.

Política del Gobierno del Reino Unido sobre el uso de la fuerza

70. Después de su declaración del 11 de noviembre de 1965 sobre la actitud que había de tomarse con respecto al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, y sobre las sanciones económicas que había que establecer, el Primer Ministro Wilson informó también al Parlamento en esa misma fecha que el problema de Rhodesia del Sur no era un asunto que debiera resolverse mediante la intervención militar, a menos que se pidiesen tropas para impedir una acción trágica, como subversión, asesinatos, etc. El Gobierno del Reino Unido no preveía ninguna medida de carácter nacional o internacional encaminada a forzar aún al régimen ilegal de Rhodesia del Sur a adoptar una actitud constitucional.

71. El 12 de noviembre de 1965, el Primer Ministro dio más detalles de la política del Gobierno del Reino Unido sobre el uso de la fuerza. Informó al Parlamento que si el Gobierno legítimamente constituido de Rhodesia del Sur, es decir, el Gobernador, pedía ayuda para resolver problemas relacionados con el orden público, el Gobierno del Reino Unido tendría que prestar plena consideración a dicha petición.

Imposición de la censura en Rhodesia del Sur

72. El 10 de noviembre de 1965, el régimen de Smith impuso la censura en Rhodesia del Sur. Las facultades en materia de censura que entraron en vigor el 11 de noviembre de 1965, incluyen la reglamentación, el control, la restricción y la prohibición de impresos, publicaciones, mensajes postales y telegrá-

ficos y transmisiones radiales, así como la entrada y salida de personal en Rhodesia del Sur. Además, el reglamento autoriza al régimen a tomar posesión y hacerse cargo del funcionamiento de periódicos, pudiendo obligar al personal de los mismos a mantener y continuar la producción de periódicos.

73. En virtud de los poderes con arreglo a la ley de censura, se impidió al *Rhodesia Herald* que publicase una edición especial el 11 de noviembre de 1965, relativa a la proclamación del Gobernador por la que despedía de sus cargos al Sr. Smith y a sus ministros.

74. El 8 de febrero de 1966, las autoridades de Rhodesia del Sur adoptaron nuevas disposiciones de emergencia en virtud de las cuales constituye un delito para los periódicos declarar expresamente, o indicar dejando espacios en blanco, que están sujetos a la censura. Las nuevas disposiciones de censura autorizan a ordenar la modificación o traslado a otra página de cualquier parte de la publicación, incluso los titulares. Puede prohibirse cualquier publicación que viole las nuevas disposiciones, y todo aquel que no las observe u obstruya la acción del censor, puede ser multado hasta por 500 libras esterlinas o condenado a dos años de cárcel.

75. Los dos periódicos de Rhodesia del Sur, el *Rhodesia Herald* y el *Chronicle* de Bulawayo, habían aparecido a menudo en el pasado con muchos espacios en blanco, indicando que sus informaciones habían sido censuradas.

76. El 7 de diciembre de 1965, el régimen del Sr. Smith dictó disposiciones para prohibir al pueblo que escuchase "transmisiones radiales subversivas y sediciosas" de países contiguos a Rhodesia del Sur. En virtud de dichas disposiciones, toda persona que haga oír o permita que se oiga en público una de estas transmisiones puede recibir una multa de 500 libras o una pena de dos años de prisión, o ambas penas a la vez. Se informó que el objetivo inmediato de esta medida era impedir que el pueblo de Rhodesia del Sur escuchara las radiodifusiones nacionalistas de Zambia. Se informó además que, por la forma en que está redactado el anuncio de este reglamento, podría muy bien abarcar las transmisiones de la nueva estación de la British Broadcasting Corporation (BBC) en Bechuania.

La radiodifusora del Reino Unido en Bechuania inicia la transmisión de programas de la BBC a Rhodesia del Sur

77. Se informó que una nueva radiodifusora del Reino Unido en Bechuania había empezado a transmitir programas dirigidos a Rhodesia del Sur el 22 de diciembre de 1965.

78. Se informó que el Sr. Arthur Bottomley, Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*, había anunciado el 29 de diciembre de 1965 que el Gobierno del Reino Unido había construido el transmisor en la zona de Francistown, cerca de la frontera de Rhodesia del Sur, para intensificar sus esfuerzos encaminados a hacer caer el régimen de Ian Smith. El Gobierno del Reino Unido había decidido tomar esta medida después que se estableció la censura de noticias en Rhodesia del Sur. Se informó además que el Sr. Bottomley había declarado que el transmisor había estado

retransmitiendo programas en forma intermitente durante una quincena, y que retransmitiría programas apropiados de la BBC.

El régimen ilegal asume nuevos poderes

79. En virtud de la *Emergency Powers Act of Southern Rhodesia*, el régimen ilegal asumió nuevos poderes el 11 de noviembre de 1965 para suspender jefes, nombrar nuevos jefes y nombrar comisionados de distrito adicionales. Asumió también poderes para requisar vehículos, equipo, edificios o locales y para tomar posesión de estaciones de radio.

80. El 11 de noviembre de 1965, el régimen asumió también poderes para retener a funcionarios de las fuerzas armadas o de la administración pública, para obligarlos a asumir cualesquiera funciones y suspenderlos de su cargo "no obstante lo que pueda estipularse en contrario en las condiciones de servicio". En virtud de estos nuevos poderes, los empleados que abandonen su empleo o se nieguen a desempeñar sus funciones podrán ser condenados a dos años de prisión, a pagar una multa de 500 libras, o a ambas penas a la vez.

81. El 10 de diciembre de 1965, el Primer Ministro Wilson declaró en el Parlamento que el régimen ilegal había introducido en Rhodesia del Sur métodos de Estado policiaco que eran incompatibles no sólo con la Constitución de 1961, sino también con todas las normas civilizadas.

La "Constitución" de Ian Smith

82. La llamada Constitución anexada a la declaración ilegal del Sr. Smith se ajusta en general a los principios y terminología de la Constitución de 1961, con algunos cambios importantes. Toda la sección relativa al Gobernador está reemplazada por disposiciones concernientes a un "administrador del Gobierno" que es también Comandante en Jefe. Los poderes del "Administrador del Gobierno" son iguales a los del Gobernador, aunque sin poderes para reservar leyes al asentimiento de la Corona. Ha de ser o bien un Gobernador General que puede ser nombrado por la Corona sólo por recomendación de los "Ministros" del "Gobierno de Rhodesia", o bien, a falta de dicho nombramiento por parte de la Corona en el plazo de 14 días, un Regente nombrado por Miembros del Consejo Ejecutivo presidido por el Primer Ministro.

83. El Poder Legislativo, los requisitos para el sufragio y las disposiciones electorales son en general las mismas de la Constitución de 1961. La declaración de derechos no sufre modificación, salvo que se suprime toda la sección que trata de la apelación al Consejo Privado.

Postura del Gobernador respecto al régimen ilegal

84. Inmediatamente después de la Declaración ilegal de independencia, Sir Humphrey Gibbs, Gobernador de Rhodesia del Sur, publicó un comunicado en el que decía que el Sr. Ian Smith y las demás personas que ocupaban cargos de Ministros del Gobierno de Rhodesia del Sur o de Ministros Adjuntos, cesaban en ellos. También hacía un llamamiento a todos los ciudadanos de Rhodesia del Sur para que se abstuviesen de cualquier acto que pudiera favorecer los propósitos del régimen ilegal. Con esta reserva, de-

claró que era deber de todos los ciudadanos mantener el orden público en el país y continuar desempeñando normalmente sus tareas. Esto se refería por igual a la judicatura, las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios.

85. No se dio publicidad a la declaración del Gobernador debido a la censura impuesta en Rhodesia del Sur.

86. Se dijo que, el 12 de noviembre de 1965, el Sr. Ian Smith había declarado que cualesquiera poderes que el Primer Ministro del Reino Unido confiriera a Sir Humphrey Gibbs, Gobernador de Rhodesia del Sur, eran nulos. También se dijo que había declarado que se había comunicado al Gobernador que, teniendo en cuenta la nueva Constitución dada al pueblo de Rhodesia del Sur por el Gobierno *de facto* que ocupaba el poder, no poseía ya ninguna autoridad en Rhodesia del Sur.

87. El 14 de noviembre de 1965, Sir Humphrey Gibbs publicó una declaración en la que manifestaba que no podía aceptar la decisión del Sr. Smith en el sentido de que no poseía ya autoridad alguna. Declaró que el Gobierno del Reino Unido le había pedido que continuara ocupando su cargo y que, por lo tanto, seguía siendo el Gobernador legítimo y la autoridad legítimamente constituida. Manifestaba también que no reconocería el régimen ilegal ni la nueva Constitución, en virtud de la cual gobernaba el país el Sr. Smith.

88. El 17 de noviembre de 1965, el Sr. Smith anunció el nombramiento del Sr. Clifford Dupont, ex Primer Ministro Adjunto, como "Administrador interino del Gobierno" para que asumiera las funciones de Gobernador bajo la llamada nueva Constitución. El 4 de diciembre de 1965, se informó que la Corona había denegado una petición hecha por el Sr. Smith para que se nombrara Gobernador General de Rhodesia del Sur al Sr. Dupont.

89. El Sr. Dupont "se juramentó" el 20 de diciembre de 1965 como "Administrador interino del Gobierno". Por tal acto, el régimen ilegal daba a entender que había reemplazado al Gobernador, Sir Humphrey Gibbs.

90. El Sr. Dupont iba a ser nombrado "Regente" de conformidad con la Constitución del Sr. Smith, pero éste anunció, el 16 de diciembre de 1965, que había decidido modificar el proyecto original y designar un "Administrador del Gobierno" por deferencia hacia la familia real británica.

91. El 16 de noviembre de 1965, se informó que un ayudante de Sir Humphrey Gibbs había dicho que el teléfono de la Casa del Gobierno, residencia oficial del Gobernador, había sido cortado. Posteriormente se informó que el régimen ilegal había privado al Gobernador de sus coches oficiales y de la mayor parte de su servidumbre; además, se había privado al Gobernador de todas las máquinas de escribir de su oficina, con excepción de dos.

92. El 18 de noviembre de 1965, el Primer Ministro Wilson informó al Parlamento que el Gobernador de Rhodesia del Sur, Sir Humphrey Gibbs, había sido nombrado por la Reina Isabel II y sólo podía ser destituido a petición de Su Majestad. Asimismo, calificó de traición la acción del régimen del Sr. Smith, de designar al Sr. Dupont para sustituir al Gobernador.

93. El 26 de noviembre de 1965, Sir Humphrey Gibbs declaró que se proponía seguir siendo el legítimo Gobernador de Rhodesia del Sur hasta que se restaurara el gobierno constitucional, cosa que, confiaba, ocurriría muy pronto. El 23 de diciembre de 1965, el Gobernador dirigió también un mensaje de Navidad al pueblo de Rhodesia del Sur en el que expresaba la esperanza de que el país volviera al gobierno constitucional.

94. No obstante, ninguna de esas declaraciones fue comunicada al pueblo de Rhodesia del Sur debido a la censura impuesta por el régimen ilegal.

95. El 10 de diciembre de 1965, el Primer Ministro Wilson aclaró ante el Parlamento la postura del Gobierno del Reino Unido respecto al régimen de Smith. Manifestó que el Gobierno no podía negociar con un régimen ilegal que había desnaturalizado, tergiversado y abusado de la Constitución de 1961 en una forma no prevista por sus autores o por el Parlamento del Reino Unido.

96. Hizo hincapié en que era el pueblo de Rhodesia del Sur, por conducto del Gobernador, el que tenía que expresar claramente el deseo de volver a su anterior obediencia y al estado de derecho. Declaró también que el Sr. Smith, lo mismo que cualquier otro particular de Rhodesia del Sur, podía presentar sus pretensiones al Gobernador y que si éste, haciendo uso de su facultad discrecional, las transmitía al Gobierno del Reino Unido, serían examinadas. No obstante, declaró también que el Gobierno del Reino Unido no estaba dispuesto a entablar negociaciones con el Sr. Smith para un retorno al gobierno constitucional, sobre bases que implicaran contactos con un régimen ilegal o cualquier clase de condiciones que no se refirieran a cuestiones de procedimiento.

97. El 21 de diciembre de 1965, el Primer Ministro Wilson declaró en el Parlamento que el Gobernador estaba permanentemente autorizado para celebrar conversaciones en Rhodesia del Sur con cualquiera que pudiera facilitar algún medio de volver al régimen constitucional. El Gobierno del Reino Unido le había autorizado a discutir incluso con el régimen ilegal la forma de restablecer en Rhodesia del Sur el régimen constitucional. Manifestó también que, para ello, había una serie de trámites, incluido el traspaso de las fuerzas armadas y de la policía a la autoridad del Gobierno, y una serie de cuestiones administrativas que podrían resolverse más fácilmente si se entablaran conversaciones.

Se desafían las prerrogativas de la Corona

98. El 20 y el 21 de enero de 1966, se informó que la Corona había hecho uso de su derecho de gracia en favor de dos africanos de Rhodesia del Sur, condenados a muerte por tentativa de incendio, de conformidad con la obligatoria sentencia de muerte establecida por la *Law and Order (Maintenance) Act*. Se informó también que, puesto que el régimen de Rhodesia del Sur era ilegal y el Gobernador estaba incapacitado para actuar, tal prerrogativa era ejercida directamente por el Reino Unido, informando directamente al Gobernador, al Fiscal General de Rhodesia del Sur y al gobernador de la prisión de los deseos de la Corona.

99. El 21 de enero de 1966, el régimen de Smith publicó una declaración en el sentido de que consideraba ilegal el ejercicio de la prerrogativa real en aquel caso. El 20 de enero de 1966, la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* manifestó que sería ilegal ejecutar la sentencia de muerte en contra de los deseos de la Corona.

El United People's Party y el régimen ilegal

100. Se informó que el partido panafricano de la oposición parlamentaria de Rhodesia del Sur había declarado, el 18 de noviembre de 1965, el boicoteo de cualquier nueva conversación con el Sr. Smith sobre su arrebatada independencia. El Sr. Josiah Gondo, jefe del United People's Party, que cuenta con diez miembros en la Asamblea Legislativa, decía en esa declaración que no podía admitirse el que su partido se reuniera con el Sr. Smith y sus colegas para discutir las formas de promover la independencia.

101. Anteriormente se había informado que el Sr. Smith había declarado, el 17 de noviembre de 1965, que confiaba en celebrar conversaciones con políticos africanos sobre el futuro de Rhodesia del Sur bajo la independencia.

La Asamblea Legislativa de Rhodesia del Sur

102. El 25 de noviembre de 1965, cuando se reunió la Asamblea Legislativa de Rhodesia del Sur, el Sr. Chad Chipunza, miembro de la oposición africana, pidió al Presidente que decidiera si el Parlamento estaba constituido y le preguntó si iba a leer a la Cámara la *Southern Rhodesia (Constitution) Order in Council, 1965*. El Dr. Ahrn Palley, miembro independiente del distrito electoral de Highfield, pidió al Presidente que suspendiera la sesión debido a que algunos miembros de la Cámara habían publicado un documento que pretendía ser una nueva constitución del país, que carecía de validez legal y que, jurídicamente, constituía un acto de rebelión; los que reconocían tal documento como nueva Constitución estaban actuando ilegalmente. El Presidente replicó que él era uno de éstos y sugirió que cualquiera que se considerase obligado por las disposiciones del Reino Unido sólo tenía una vía de acción, que era retirarse de las deliberaciones de la Cámara.

103. Como consecuencia de nuevos intentos de interrogar al Presidente, el Dr. Palley fue suspendido en sus funciones y obligado a retirarse de la Cámara por el oficial de orden. Se informó que le siguieron nueve de los catorce miembros restantes que representaban distritos electorales de la lista "B".

El Sr. Smith dirige un mensaje a las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos sobre su lealtad al régimen ilegal

104. El 15 de noviembre de 1965 el Sr. Smith dirigió un mensaje a todos los empleados del Gobierno, incluidos todos los oficiales y soldados de la British South African Police, del ejército y de la Real Fuerza Aérea de Rhodesia y de los servicios de prisiones, advirtiéndoles para que se precavieran contra los esfuerzos del Gobierno del Reino Unido por minar su lealtad al régimen. En su mensaje, el Sr. Smith de-

claraba que su Gobierno era el Gobierno de Rhodesia del Sur, y que debían hacer caso omiso de cualquier manifestación del Gobernador o de cualquier persona que pretendiera hablar en su nombre, o de los funcionarios o miembros del Gobierno del Reino Unido.

Opinión del Gobierno del Reino Unido en cuanto a la situación de los funcionarios públicos de Rhodesia del Sur

105. En su intervención ante el Parlamento, el 11 de noviembre de 1965, el Primer Ministro Wilson declaró que era deber de todos los súbditos británicos de Rhodesia del Sur permanecer leales a la Corona y seguir reconociendo la autoridad y responsabilidad del Gobierno del Reino Unido en Rhodesia del Sur.

106. En una entrevista en la BBC, el 17 de noviembre de 1965, se preguntó al Sr. Wilson qué podía decir a los leales de Rhodesia del Sur que deseaban saber qué tenían que hacer ante las pretensiones del Sr. Smith en cuanto a su obediencia personal. El Primer Ministro aludió a los rumores sobre el juramento de fidelidad al régimen de Smith, manifestando que tal juramento era ilegal y que nadie podría prestarlo sin cometer un nuevo acto ilegal. Añadió que era cuestión de conciencia para todo funcionario público el no hacer nada que favoreciera los fines de la rebelión y que no podían hacerlo, en virtud de su juramento a la Corona. Con esta reserva, la opinión del Gobierno era que debían continuar prestando sus servicios ordinarios y — especialmente la judicatura — ayudar a mantener el orden público, pero que, si se les pedía que hicieran un juramento ilegal, esto tendrían que decidirlo a la luz de todas las circunstancias. Podría ocurrir muy bien que los funcionarios fieles a la Corona, al permanecer en sus puestos — siempre que no se les pidiera que fomentaran los fines de la rebelión — se encontraran en condiciones de frustrar los propósitos de la rebelión y acelerar el restablecimiento en Rhodesia del Sur del imperio del derecho y de su antigua obediencia. Declaró también que los que perdieran sus puestos a consecuencia de su lealtad al derecho no perderían sus pensiones ni sus derechos adquiridos.

107. Se informó que la declaración del Primer Ministro había sido transmitida por la BBC a Rhodesia del Sur. Esa declaración fue pronunciada un día después que la African Workers Postal Union, que cuenta con 4.000 miembros, hiciera un llamamiento público al Gobierno del Reino Unido para que les orientara sobre la cuestión de si debían firmar un juramento de lealtad al régimen de Smith.

El Tribunal Supremo de Rhodesia del Sur y la legalidad del régimen de Ian Smith

108. El 13 de enero de 1966, la directora del *Central African Examiner* impugnó ante el Tribunal Supremo de Rhodesia del Sur la legalidad del régimen de Smith. La directora del *Examiner* pretendía que el decreto relativo a la censura dictado el 10 de noviembre de 1965 por el Gobierno de Rhodesia del Sur había sido revocado por un real decreto emitido por el Gobierno del Reino Unido el 19 de noviembre de 1965, y que había dejado de tener validez o de surtir efecto a partir de esa fecha. Se pidió al Magistrado con urgencia que se pronunciara sobre la validez del decreto de censura, en vista de las graves limitaciones que imponía a la libertad de expresión y del

hecho de que la revista deseaba publicar en su número de febrero artículos que debían haber aparecido en el número de Navidad, pero habían sido censurados.

109. La editora del *Examiner* sostenía además que el actual Gobierno de Rhodesia del Sur, a pesar de encontrarse de hecho en el poder, no era su gobierno legal. Alternativamente, mantenía que, en el caso de que fuera el gobierno legal, lo sería en virtud de la Constitución de 1961.

110. El régimen de Rhodesia del Sur sostenía que la "Constitución de 1965" estaba vigente en Rhodesia del Sur y que la ley parlamentaria del Reino Unido y los decretos dictados en su virtud carecían de toda vigencia y no podían producir efecto en Rhodesia del Sur. Mantenía además que el Tribunal Supremo no tenía competencia para conocer de una impugnación de la validez de la "Constitución de 1965" y del actual Gobierno, que se hallaba constituido y nombrado en virtud de ésta.

111. El régimen de Smith también sostenía que el actual Gobierno de Rhodesia del Sur, constituido y nombrado de conformidad con la "Constitución de 1965", se hallaba plenamente establecido como el Gobierno legítimo y efectivo de Rhodesia del Sur y que la continuación en sus puestos de los Ministros del Gabinete era asimismo legítima.

112. El 14 de enero de 1966 se informó que, en el curso de las actuaciones del Tribunal Supremo, el Fiscal General del régimen ilegal señaló que era posible la clausura total de los tribunales si éstos se dejaban arrastrar a la lucha política y constitucional en favor del Reino Unido.

113. El 27 de enero de 1966, el Magistrado desestimó la demanda declarando, según se informa, que la cuestión de que se trataba directamente — la validez del reglamento de censura del régimen de Smith — debía ser resuelta por un tribunal de lo criminal. Al propio tiempo, se informó también que había declarado que no se planteaba cuestión alguna de que el tribunal tomara partido en una lucha política entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Rhodesia del Sur.

Las fuerzas armadas de Rhodesia del Sur

114. El 12 de noviembre de 1965 se informó que el Ejército de Rhodesia del Sur estaba formado por 3.400 hombres en servicio activo y 8.400 reservistas blancos. Se dijo que el Ejército tenía dos batallones regulares: el de Infantería Ligera de Rhodesia, compuesto exclusivamente por blancos, y el de Fusileros Africanos de Rhodesia, con oficialidad blanca. Se dijo también que había ocho batallones de la Guardia Nacional, cuatro de los cuales se sabía estaban en servicio activo y, los demás, en diversos grados de preparación.

115. Se informó además que la Real Fuerza Aérea de Rhodesia tenía 75 aviones y 900 hombres incluidos un escuadrón de bombarderos B-57, uno de cazas *Hunter*, un escuadrón de reconocimiento de *Prevosts* armados, un escuadrón de helicópteros *Alouette* y un escuadrón de transporte de aviones DC-38, y aviones canadienses *North Star*.

116. En el informe se decía también que Rhodesia del Sur poseía una importante fuerza regular de policía de 6.000 hombres, todavía llamada British South

African Police, 2.000 de los cuales eran blancos. Se decía además que la Policía de Reserva ascendía a 28.000 hombres, 21.000 de los cuales eran blancos.

Manifestaciones políticas contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur

117. El 12 de noviembre de 1965, se dijo que, el 11 de noviembre de 1965, 300.000 copias de una declaración hecha por el Sr. Ian Smith habían sido distribuidas entre la población africana, advirtiéndole que tanto la policía como el ejército estaban dispuestos a enfrentarse a cualquiera que causara disturbios.

118. Se informó que, el 15 de noviembre de 1965, policías de Rhodesia del Sur armados de escopetas habían deshecho una huelga de trabajadores africanos en Bulawayo que protestaban contra la declaración ilegal de independencia. El 22 de noviembre de 1965, miles de africanos se declararon en huelga en las ciudades de Bulawayo y Gwelo, como protesta contra la declaración unilateral de independencia.

119. El 23 de noviembre de 1965 se informó que un africano había resultado muerto en Bulawayo al abrir fuego la policía para dispersar una manifestación africana. Un africano recibió un disparo en una pierna cuando la policía hizo fuego para dispersar a los manifestantes en el municipio africano de Que Que. El 24 de noviembre de 1965, la policía empleó gases lacrimógenos para deshacer manifestaciones políticas en Bulawayo. El 22 de noviembre de 1965, la policía hizo fuego para dispersar a una multitud de manifestantes políticos en Salisbury.

Detenidos y confinados en Rhodesia del Sur

120. El 18 de enero de 1966 se informó que, en los dos últimos meses, había aumentado mucho en Rhodesia del Sur el número de personas confinadas pero había disminuido el número de detenciones. Se informó que un portavoz del régimen de Rhodesia del Sur había anunciado, el 18 de enero, que en Rhodesia del Sur había unas 350 personas confinadas y entre 20 y 30 detenidas.

121. El 25 de noviembre de 1965, el Sr. Lardner-Burke, "Ministro de Justicia y Orden Público", comunicó a la Asamblea Legislativa que existían 276 personas confinadas y 47 detenidas.

122. Las últimas informaciones sobre las órdenes de confinamiento que, según se informó, habían sido publicadas en la *Government Gazette*, indicaban que 22 personas fueron condenadas a confinamiento entre el 14 y el 24 de diciembre de 1965. De éstas, cuatro — entre ellas, una mujer — fueron condenadas a cinco años de confinamiento, siete a tres años, cinco a dos años y seis a un año. Se informó que el portavoz de las autoridades de Rhodesia del Sur había declarado que la cifra de 350 personas confinadas comprendía un pequeño número de personas sometidas a confinamiento sólo por dos o tres semanas, en virtud de normas de urgencia.

Cifras de población

123. El 21 de enero de 1966 se informó que, según el *Government Monthly Statistical Report* de Rhodesia del Sur, de enero de 1966, la población de Rhodesia del Sur había alcanzado la cifra sin precedentes

de 4.330.000 habitantes. Había 4.080.000 africanos, una comunidad asiática de 8.100 personas y otra de 13.000 personas de color (mestizos). De conformidad con las cifras oficiales, la población blanca de Rhodesia del Sur era de 224.000 habitantes en diciembre de 1965. Se informó que era la segunda vez que el número de blancos llegaba a 224.000. Se dijo que, en 1963, el número de blancos descendió hasta 221.000, al disolverse la Federación del África Central.

Relaciones entre Sudáfrica y Rhodesia del Sur

124. El 11 de noviembre de 1965, el Dr. H. Verwoerd, Primer Ministro de Sudáfrica, formuló declaraciones sobre la declaración unilateral de independencia efectuada por el Gobierno de Rhodesia del Sur. El Primer Ministro de Sudáfrica manifestó que los problemas que habían surgido entre el Reino Unido y Rhodesia del Sur constituían y debían seguir constituyendo una controversia limitada sólo a estos Gobiernos. Esa limitación favorecía a la paz mundial. El Gobierno de Sudáfrica había condenado y condenaba continuamente el hecho de que otros Estados u organizaciones hubieran considerado necesario intervenir en este asunto interno. El Gobierno de Sudáfrica continuaría su política de no intervención. De acuerdo con esta actitud, que había adoptado en el curso de la controversia, tanto antes de la declaración de independencia de Rhodesia del Sur, como después de ella, no expresaría opinión alguna sobre los argumentos aducidos por el Reino Unido ni por Rhodesia del Sur en esta cuestión. Sin embargo, el Gobierno de Sudáfrica seguiría manteniendo relaciones amistosas normales con ambos países.

125. Manifestó también que, a diferencia de lo que ocurría en el caso de países situados a gran distancia uno de otro, era sumamente importante para la República de Sudáfrica que sus relaciones corrientes con sus vecinos de Rhodesia del Sur continuaran como en el pasado. Dado el alcance y el carácter de esas relaciones, era imposible no mantenerlas, independientemente de quien ejerciera la autoridad efectiva en Rhodesia del Sur. En consecuencia, Sudáfrica no podía participar en medidas tales como un movimiento de boicoteo.

126. Sudáfrica siguió manteniendo relaciones con el régimen ilegal. El Sr. John Gaunt, ex representante de Rhodesia del Sur en Sudáfrica, manifestó el día 23 de noviembre de 1965, según se informó, que no se había producido cambio alguno en su condición después de la "declaración de independencia". También se dijo que había manifestado que seguía siendo "representante diplomático plenipotenciario de Rhodesia del Sur en la República".

Relaciones entre Portugal y Rhodesia del Sur

127. El 27 de julio de 1965, el Gobierno de Rhodesia del Sur anunció la designación de un "representante diplomático" ante Portugal que tendría efecto a partir del 1º de agosto de 1965. El Sr. Harry Reedman, representante designado, llegó a Lisboa el 15 de septiembre de 1965 y efectuó una visita protocolar al Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal el 20 de septiembre de 1965. Un vocero del Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal dijo que el Sr. Reedman había presentado "una carta de presentación" y que su condición en ese país sería la de "Jefe de la

Misión de Rhodesia". Dicho vocero manifestó asimismo que el Sr. Reedman trataría directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal sobre todos los asuntos que interesaran a Portugal y Rhodesia del Sur.

128. El Gobierno del Reino Unido, a quien corresponde la responsabilidad por los asuntos exteriores de Rhodesia del Sur, puso en tela de juicio la condición del Sr. Reedman. Dicho Gobierno había deseado que el Sr. Reedman estuviera acreditado ante la Embajada del Reino Unido.

129. El 1º de octubre de 1965, el Gobierno de Portugal formuló una declaración, relativa a los representaciones de Rhodesia del Sur en Lisboa, según la cual el Gobierno del Reino Unido había publicado un texto trunco de una nota portuguesa en la que se respondía a una nota del Gobierno británico del 23 de septiembre de 1965 en la que éste pedía a Portugal que aclarara su punto de vista sobre la condición del representante de Rhodesia del Sur en Lisboa. El Gobierno de Portugal no abrigaba la menor duda de que Rhodesia del Sur no era un país soberano y correspondía al Gobierno del Reino Unido conducir las relaciones exteriores de Rhodesia del Sur que pudieran afectar la responsabilidad definitiva del Gobierno del Reino Unido. Por otro lado, la frontera común entre el territorio portugués y Rhodesia del Sur, la antigua tradición de relaciones amistosas entre los dos países y sus respectivos gobiernos, y la existencia de muchos problemas comunes, justificaban el que Rhodesia del Sur estuviera representada en Lisboa sobre una base que correspondiera a la condición de ese territorio.

130. No se ha informado de cambio alguno en la condición del Sr. Reedman desde que se hiciera la declaración ilegal de independencia.

131. El Dr. Alberto Franco Nogueira, Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, trató principalmente, en una conferencia de prensa el 25 de noviembre de 1965, de la posición de su Gobierno respecto al asunto de las sanciones (véase el párrafo 268 *infra*). Declaró sin embargo que Portugal seguiría manteniendo relaciones normales con el que, según se dijo, calificó de "gobierno local" de Rhodesia del Sur.

Medidas adoptadas por la Organización de la Unidad Africana (OUA)

132. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana que se celebró en Accra, Ghana, entre el 21 y el 25 de octubre de 1965, aprobó dos resoluciones sobre Rhodesia del Sur.

133. En la primera resolución, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA formularon un llamamiento a las Naciones Unidas pidiéndoles que consideraran toda declaración unilateral de independencia del Gobierno de la minoría europea de Rhodesia del Sur como una amenaza a la paz internacional, y que adoptaran todas las medidas que esa situación exigiera, de acuerdo con la Carta, y prestaran su ayuda para establecer un Gobierno de la mayoría en Rhodesia del Sur. En la resolución también se pedía a todos los gobiernos y organismos internacionales que, en el caso de hacerse una declaración unilateral de independencia, se abstuvieran de reconocer a un gobierno de la minoría europea y aplicaran sanciones.

134. En la resolución se pidió también al Gobierno del Reino Unido que adoptara todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para tomar posesión de la administración de Rhodesia del Sur; que pusiera en libertad a los dirigentes de los movimientos nacionalistas, el Sr. Joshua Nkomo, el Reverendo N. Sithole y todos los demás presos políticos; que organizara una conferencia constitucional en la que participaran los representantes de toda la población de Rhodesia del Sur, con miras a adoptar una nueva constitución que garantizara el sufragio universal de los adultos, las elecciones libres y la independencia.

135. En el caso de que el Gobierno del Reino Unido no adoptara las medidas antes mencionadas, todos los Estados miembros de la OUA, entre otras medidas, emplearían todos los medios posibles, incluido el uso de la fuerza, con el fin de oponerse a una declaración unilateral de independencia y darían toda la asistencia necesaria en forma inmediata al pueblo de Zimbabwe (Rhodesia del Sur) con el fin de establecer un gobierno de la mayoría en el país.

136. La resolución autorizaba también al grupo de países africanos representados en las Naciones Unidas a que se asegurara de que el pedido enviado a éstas y al Consejo de Seguridad fuera debidamente examinado.

137. En la segunda resolución, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA resolvieron crear un comité de cinco miembros compuesto por la República Árabe Unida, Kenia, República Unida de Tanzania, Zambia y Nigeria para que velara por la aplicación efectiva de la anterior resolución.

138. Se celebró en Addis Abeba, del 3 al 5 de diciembre de 1965, un período extraordinario de sesiones del Consejo de Ministros de la OUA, a fin de examinar la política que adoptaría esta organización para responder a la declaración ilegal de independencia. El Consejo de Ministros aprobó tres resoluciones sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. En la primera convino, entre otras cosas, en efectuar un bloqueo total de Rhodesia, suspender todas las relaciones económicas, "congelar" las cuentas de Rhodesia en bancos africanos, negar todo medio de transporte a Rhodesia y desde ésta, incluso el paso de aviones sobre sus territorios, prohibir todas las comunicaciones telegráficas, telefónicas, de télex y de radioteléfono con Rhodesia, y formular un llamamiento a todos los países para que impusieran un embargo sobre los suministros de petróleo y combustible destinados a Rhodesia.

139. El Consejo de Ministros convino en pedir a todos los Estados africanos que presentaran a la OUA copias de todas las leyes por las que se diera aplicación a las decisiones del Consejo.

140. En la segunda resolución, el Consejo de Ministros solicitó también al Comité de los Cinco que recurriera a los expertos militares de los Estados miembros con el fin de estudiar y planificar el uso de la fuerza para prestar asistencia al pueblo de Zimbabwe; pidió a todos los Estados miembros que dieran, por conducto del Comité de los Cinco, toda clase de ayuda al pueblo de Zimbabwe en su lucha nacional contra la dominación extranjera; solicitó al Comité de los Cinco que formulara un llamamiento a los Estados miembros para que hicieran una aportación militar a fin de hacer frente a cualquier situación de emergencia que pudiera producirse en los Estados miembros contiguos a Rhodesia.

del Sur, sin perjuicio del derecho de esos Estados a pedir directamente tal asistencia a cualquier nación hermana de África; pidió al Comité de los Cinco que determinara qué aportación militar o de otra índole podrían efectuar los Estados miembros para hacer frente a toda situación de emergencia que surgiera si uno de los Estados miembros de la OUA contiguo a Rhodesia del Sur se viera en peligro de ser atacado; y dirigió un llamamiento urgente a todos los Estados miembros para que facilitaran en toda forma la tarea confiada al Comité de los Cinco.

141. En la tercera resolución, el Consejo de Ministros dio instrucciones al grupo africano en las Naciones Unidas para que pidiera la aplicación de la resolución 217 (1965), aprobada por el Consejo de Seguridad el 20 de noviembre de 1965.

Medidas adoptadas por otras organizaciones internacionales

142. La Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) manifestó, el 19 de noviembre de 1965, que había cortado todo contacto con el régimen de Ian Smith y que no tendría nuevas comunicaciones con él, aunque Rhodesia del Sur como tal seguía siendo miembro plenamente capacitado del GATT.

143. El 19 de noviembre de 1965, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una resolución relativa a Rhodesia del Sur⁶. En esta resolución, el Consejo de Administración pidió al Director General que comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas que la OIT haría todo cuanto pudiera para contribuir dentro de su propia esfera a la acción que el Consejo de Seguridad decidiera iniciar; que se abstuviera de todo contacto, oficial u oficioso, directo o indirecto, con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, y que se mantuviera al corriente de la evolución de la situación e informara al Consejo de Administración en su período de sesiones siguiente.

144. El 17 de noviembre de 1965, el Gobierno del Reino Unido informó al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que en las presentes circunstancias no deseaba mantener su solicitud de admisión de Rhodesia del Sur como miembro asociado. La FAO no adoptó decisión alguna con respecto a dicha solicitud de admisión.

145. El 29 de noviembre de 1965, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a todos los miembros y miembros asociados que toda comunicación oficial entre la OMS y el Territorio había sido suspendida a partir del 11 de noviembre de 1965.

146. En el curso del último período de sesiones del Comité de Asistencia Técnica se planteó la cuestión de la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad del 20 de noviembre de 1965 a la asistencia prestada a Rhodesia del Sur dentro del marco del Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), y en el informe presentado por el Comité al Consejo Económico y Social se hizo constar la satisfacción de éste por la declaración del Presidente Ejecutivo, según la

cual no se tomaría ninguna determinación sobre autorizaciones para casos de urgencia a favor de Rhodesia del Sur, y su advertencia de que desde la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad, las organizaciones participantes en el PAAT, así como los organismos de ejecución del Fondo Especial, habían pedido que se retiraran a Zambia todos los expertos enviados a Rhodesia del Sur, hasta que se aclarase la situación política en ese país.

147. A solicitud del Gobierno del Reino Unido, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó también las disposiciones necesarias para suspender las comunicaciones oficiales con Rhodesia del Sur.

La reunión de Primeros Ministros del Commonwealth en Lagos

148. El 11 y el 12 de enero de 1966 se celebró en Lagos, Nigeria, una reunión de Primeros Ministros del *Commonwealth* para discutir la cuestión de Rhodesia del Sur.

149. En el comunicado final de la Conferencia, los Primeros Ministros convinieron en que el objetivo para el futuro progreso de Rhodesia del Sur debía ser el establecimiento de una sociedad justa basada en la igualdad de posibilidades a la que todos los sectores de la comunidad podrían contribuir con todos sus recursos y de la que todos tuvieran los beneficios debidos sin discriminación ni impedimentos injustos.

150. A este efecto se afirmaron varios principios. El primero fue la determinación de todos los presentes a que se pusiera fin a la rebelión. Debía libertarse a todos los detenidos por razones puramente políticas. Las actividades políticas debían ser constitucionales y desarrollarse libres de intimidaciones provenientes de todo sector. Debían anularse las leyes represivas y discriminatorias. Los Primeros Ministros tomaron nota de la declaración formulada por el Gobierno del Reino Unido, de que sería necesario un período de gobierno directo, conducente a la celebración de una conferencia constitucional. Esta conferencia, en la que estarían representados todos los sectores del pueblo de Rhodesia del Sur, tendría por objeto recomendar una constitución en virtud de la cual se pudiera llegar a un gobierno de la mayoría sobre una base aceptable a todo el pueblo de Rhodesia del Sur.

151. Los Primeros Ministros examinaron las medidas adoptadas por los países del *Commonwealth* y los otros países contra el régimen ilegal, y tomaron nota de las mismas. Algunos de ellos expresaron su preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas hasta entonces no habían conducido a la supresión de dicho régimen. Pidieron a todos los países que no lo hubieran hecho aún, que actuaran de acuerdo con las recomendaciones hechas en la resolución del Consejo de Seguridad del 20 de noviembre de 1965, disponiendo al mismo tiempo lo necesario para hacer frente a las repercusiones que pudieran tener esas nuevas medidas en la economía de Zambia.

152. Los Primeros Ministros estudiaron la cuestión del uso de la fuerza militar en Rhodesia del Sur y se aceptó que no se podría excluir su uso si resultaba necesario para restablecer el orden público.

153. A este respecto, los Primeros Ministros tomaron nota de la declaración formulada por el Primer

⁶ Véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965*, documento S/6597.

Ministro del Reino Unido de que, en opinión de sus asesores, los efectos acumulados de las sanciones económicas y financieras bien podrían poner fin a la rebelión en cuestión de semanas y no de meses. Si bien algunos de los Primeros Ministros tenían dudas a este respecto, todos expresaron la esperanza de que estas medidas tendrían por consecuencia el derribamiento del régimen ilegal de Rhodesia del Sur dentro del período indicado por el Primer Ministro del Reino Unido.

154. Los Primeros Ministros decidieron que el *Commonwealth* adoptara las medidas siguientes, con efecto inmediato:

1) Establecer dos comités permanentes compuestos por representantes de todos los países del *Commonwealth* para que se reunieran con el Secretario General de la Secretaría del *Commonwealth* en Londres. El primero examinaría regularmente el efecto de las sanciones, así como las necesidades especiales que pudieran surgir de tiempo en tiempo al dar cumplimiento al compromiso asumido por el *Commonwealth* de acudir en ayuda de Zambia cuando ello fuera necesario. El segundo coordinaría un programa de asistencia especial del *Commonwealth* para la capacitación de africanos de Rhodesia, como se indica más adelante.

2) El Comité de sanciones recomendaría la celebración de una nueva reunión de Primeros Ministros cuando lo juzgara necesario. De todas maneras, los Primeros Ministros convinieron en reunirse nuevamente en julio de 1966 si no se había puesto fin a la rebelión para entonces.

3) El Comité de sanciones informaría al Primer Ministro si consideraba necesaria la adopción de medidas por parte de las Naciones Unidas.

4) Algunos Primeros Ministros señalaron que se reservaban el derecho de proponer una acción obligatoria de las Naciones Unidas en virtud de los Artículos 41 ó 42 del Capítulo VII de la Carta, si surgía la necesidad de ello. Los demás Jefes de Gobierno tomaron nota de esta declaración.

155. Los Primeros Ministros convinieron en que debía comenzar a prestarse inmediatamente asistencia planificada a un gobierno de Rhodesia del Sur legítimamente constituido. En consecuencia, aprobaron el establecimiento de un programa especial del *Commonwealth* destinado a contribuir a acelerar la capacitación de africanos de Rhodesia y encargaron al Secretario General de la Secretaría del *Commonwealth* que dispusiera lo más pronto posible la celebración de una reunión de expertos en asistencia educativa y técnica para que examinaran proyectos detallados de ayuda por parte de países del *Commonwealth*, incluso la pronta creación de un centro de capacitación administrativa en Rhodesia del Sur.

Declaración del Sr. Ian Smith sobre una reanudación de conversaciones con el Reino Unido

156. Según informaciones recibidas, el Sr. Smith manifestó, el 17 de enero de 1966, que estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con el Gobierno del Reino Unido. Se dijo que el Sr. Ian Smith había manifestado que pensaba que debían tratar de iniciar negociaciones en pro de las buenas relaciones anglo-rhodesias y que si esas negociaciones podían resolver problemas actuales, había llegado el momento de comenzarlas. También se informó que el Sr. Ian Smith se había negado a manifestar cuáles eran sus condiciones para negociar, por temor de que ello pudiera debili-

tar su posición, pero que había declarado que insistiría en que Rhodesia del Sur siguiera siendo independiente.

Visita del Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur al Reino Unido

157. Sir Hugh Beadle, Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur, visitó el Reino Unido del 18 al 24 de enero de 1966, con el fin de celebrar conversaciones con el Primer Ministro Wilson y el Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*. Se informó que la visita del Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur al Reino Unido sustituía la propuesta visita del Secretario de Relaciones con el *Commonwealth* a Rhodesia del Sur a fin de conversar con el Gobernador el 14 de enero de 1966. Se resolvió que no se efectuara esa visita cuando el Sr. Smith impuso condiciones para ella que equivalían a un reconocimiento del régimen ilegal por parte del Reino Unido. Sir Hugh Beadle, Presidente de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur, es aún reconocido como tal por el Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, su posición no ha sido recusada por el régimen ilegal.

158. Aunque Sir Hugh realizaba una visita particular, el objeto de ésta, según se dijo, era el de informar al Gobierno del Reino Unido sobre los acontecimientos que se habían producido en Rhodesia del Sur y recibir información del Primer Ministro del Reino Unido sobre nuevos planes del Gobierno relativos a la cuestión de Rhodesia del Sur.

159. Se informó que los temas principales sobre los que el Gobierno del Reino Unido deseaba conversar con el Presidente de la Corte Suprema comprendían los acontecimientos que siguieron a la Conferencia del *Commonwealth* sobre Rhodesia del Sur celebrada en Lagos y los planes del Reino Unido para el desarrollo de Rhodesia del Sur una vez que se restableciera el gobierno constitucional. Se informó también que el Gobierno del Reino Unido deseaba vivamente conocer la opinión de Sir Hugh acerca de las consecuencias de las sanciones económicas sobre Rhodesia del Sur. Se informó que la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* había manifestado el 18 de enero de 1966 que la visita de Sir Hugh había sido concertada entre el Gobernador de Rhodesia del Sur, Sir Humphrey Gibbs, y el Gobierno del Reino Unido.

160. Según informaciones recibidas, un vocero del Gobierno del Reino Unido recalcó el 23 de enero de 1966 que Sir Hugh no llevaría un mensaje al Sr. Smith. No se formularon declaraciones oficiales sobre las conversaciones que tuvieron lugar entre Sir Hugh y el Gobierno del Reino Unido. Sir Hugh regresó a Rhodesia del Sur el 25 de enero de 1966, habiéndose informado que había conversado durante 90 minutos con el Sr. Smith el 27 de enero de 1966. Los voceros del régimen ilegal se negaron a confirmar o a desmentir que se hubieran celebrado esas conversaciones. Se creía que Sir Hugh había rendido informe por separado al Sr. Smith y al Gobernador, Sir Humphrey Gibbs, sobre la actitud del Gobierno del Reino Unido con respecto a la crisis de Rhodesia del Sur.

Declaración hecha por el Primer Ministro del Reino Unido ante el Parlamento el 25 de enero de 1966

161. El 25 de enero de 1966, el Primer Ministro Wilson formuló ante el Parlamento una declaración sobre la cuestión de Rhodesia del Sur.

162. En su declaración, el Primer Ministro manifestó que el primer objetivo del Gobierno del Reino Unido era el de poner fin a la rebelión de Rhodesia del Sur tan pronto como fuera posible, sin causar un perjuicio duradero al país. Para ello mantendría y, si fuera necesario, intensificaría las medidas económicas con miras a lograr una rápida solución. El Gobierno del Reino Unido también se proponía ayudar al pueblo de Rhodesia del Sur a comenzar de nuevo la labor de establecer una sociedad justa sin discriminación. Este nuevo comienzo debía iniciarse con un retorno incondicional al gobierno constitucional.

163. No podía negociarse sobre el destino de Rhodesia del Sur con el régimen que ilegalmente afirmaba gobernar al país, si bien el Gobernador estaba autorizado a recibir de dicho régimen cualesquier propuestas sobre los medios por los cuales había de ponerse fin a la rebelión. Pero el examen del porvenir constitucional de Rhodesia del Sur debía efectuarse con personas responsables que representaran a todo el pueblo. Era evidente que el pueblo de Rhodesia del Sur no podía pasar directamente de la rebelión a la independencia. Ese proceso conducente al gobierno de la mayoría debía reanudarse sin demora ni obstáculos, pero sólo a un ritmo dictado por el progreso y las realizaciones de los africanos.

164. Suponiendo que se produjera un retorno pronto y pacífico al Gobierno constitucional, la disposición que sería más oportuno adoptar en la primera etapa posterior a este retorno parecería ser que el Gobernador formara un Gobierno Interino de rhodesios del Sur, responsable ante él, que representara lo más ampliamente posible la opinión pública de todas las razas del país y constituyera un gobierno representativo para la reconstrucción. Durante este tiempo, las fuerzas militares y de policía estarían bajo la jurisdicción directa del Gobernador. La primera obligación de este Gobierno Interino sería la de mantener el orden público. Esto exigiría no sólo las precauciones normales contra los disturbios internos y la ilegalidad, sino también las garantías necesarias para impedir que se repitiera la rebelión y para proteger los derechos humanos. Sería necesario que se dieran al Reino Unido seguridades respecto a la suficiencia y la eficacia de estas garantías.

165. El Gobierno del Reino Unido estaría dispuesto a contribuir a satisfacer las necesidades económicas del país para restablecer la economía de Rhodesia del Sur y, en particular, a prestar asistencia, en cooperación con otros gobiernos del *Commonwealth*, mediante la aplicación de planes para el progreso, la educación y la capacitación de africanos a fin de que éstos pudieran desempeñar plenamente y cuanto antes el papel que les correspondía en el desarrollo de las instituciones económicas y políticas del país.

166. Debía ponerse en libertad a las personas confinadas o detenidas por razones puramente políticas, siempre que éstas dieran garantías de que llevarían a cabo sus actividades políticas por medios constitucionales.

167. No podía preverse en el momento la duración de este período de Gobierno Interino, ni tampoco la fecha en que será posible restablecer las instituciones parlamentarias. El Gobierno Interino se mantendría hasta que se pudiera estabilizar la situación y se cicatrizaran las heridas sociales y políticas sufridas por el país. Debería obtenerse la opinión del pueblo de

Rhodesia del Sur sobre las enmiendas y los cambios que sería necesario introducir en la Constitución de 1961 para lograr el restablecimiento de un Gobierno plenamente constitucional sobre la base de los cinco principios del Gobierno del Reino Unido. A éstos debía agregarse un sexto principio, a saber, el de la necesidad de que, independientemente de la raza, no se produjera una opresión de la mayoría por la minoría, ni de la minoría por la mayoría.

168. El Primer Ministro terminó su declaración manifestando que ahora correspondía a todos los sudrhodesios responsables, sinceramente interesados en el verdadero bienestar del país, poner fin a la rebelión antes que fuera demasiado tarde, y ayudar al representante de la Corona a mantener el derecho constitucional en Rhodesia del Sur.

Cambios en el régimen ilegal

169. El 31 de diciembre de 1965, el régimen de Ian Smith anunció que se habían introducido cambios en el gabinete. Lord Graham, "Ministro de Agricultura", pasó a ser titular de los "Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa". Las dos carteras habían estado vacantes desde el nombramiento del Sr. Clifford Dupont como "Administrador Interino del Gobierno". El Sr. George Rudland, "Ministro de Transportes, Carreteras y Circulación por Carretera" pasó a ser también "Ministro de Agricultura", abandonando las funciones relativas a carreteras y circulación por carretera. El Sr. Basil Musset, "Ministro de Gobierno Local y Vivienda" añadió a sus carteras las funciones relativas a carreteras y circulación por carretera.

Prórroga del estado de emergencia por un nuevo plazo de tres meses

170. La "Asamblea legislativa" de Rhodesia del Sur se reunió el 2 de febrero de 1966 y examinó la prórroga del antiguo estado de emergencia, de tres meses de duración, por un nuevo plazo de tres meses. Al presentar la moción encaminada a dar efectividad a esa medida, el Sr. Lardner Burke, "Ministro de Justicia y Orden Público", informó a la "Asamblea Legislativa" que la declaración original del estado de emergencia de 5 de noviembre de 1965 se había adoptado sencillamente para mantener el orden público y nada tenía que ver con la declaración unilateral de independencia. El "Gobierno de Rhodesia del Sur" consideraba necesario prorrogar el actual estado de emergencia por no menos de tres meses. El Sr. Burke también informó a la "Asamblea Legislativa" que estaba enterado de que ciertos individuos descarriados del país, algunos de ellos con una posición elevada, que habían ocupado importantes cargos políticos o representado al Gobierno en funciones de distinto carácter, habían formado lo que familiarmente se llamaba un "gabinete de la oposición". Esos individuos se habían reunido y examinado distintas cuestiones y trataban de constituirse en gobierno a fin de tomar el poder, si se lo pedía Sir Humphrey Gibbs o el Primer Ministro Harold Wilson. El Sr. Burke declaró que se les había advertido que si insistían en su empeño de derrocar el "Gobierno", éste no vacilaría en proceder contra ellos como había procedido con todo el que había tratado de hacer correr sangre en el país.

171. El 3 de febrero de 1966, la "Asamblea Legislativa", por 34 votos contra 13, prorrogó el estado de

emergencia por un nuevo período de tres meses. Una enmienda que presentó la oposición, encaminada a limitar la prórroga a un mes, fue rechazada por el mismo número de votos. Dicha enmienda fue presentada por un miembro africano, el Sr. C. Hlabangana, perteneciente al United Peoples Party. Se afirmó que éste había dicho en la "Asamblea Legislativa" que el estado de emergencia era una cortina de humo tras la cual el gobierno minoritario blanco del Sr. Smith ocultaba cosas feas. También se afirmó que había manifestado que, de no mediar las disposiciones relativas al estado de emergencia, habría una guerra civil, y que dicho estado era una forma desembozada de intimidar a la oposición.

Peticiones de Rhodesia del Sur al Consejo Privado

172. El 26 de enero de 1966 se informó que las autoridades de Rhodesia del Sur habían presentado solicitudes al Comité Judicial del Consejo Privado para que las autorizara a retirar las apelaciones interpuestas contra dos fallos de la Corte Suprema de Rhodesia del Sur en que se habían declarado nulas las órdenes de confinamiento y detención expedidas en 1964 contra el Sr. Joshua Nkomo, dirigente nacionalista africano, y contra otros dieciséis africanos (A/6000/Rev.1, cap. III, párr. 57). El Sr. Desmond William Lardner-Burke, como "Ministro de Justicia y Orden Público", había apelado ante el Consejo Privado de esa decisión y también de un fallo según el cual no podían tener fuerza legal las órdenes por las que se confinaba al Sr. Nkomo y a otras ciento siete personas a la zona restringida de Gonakudzinga o Wha Wha.

Enjuiciamiento de veinticuatro africanos

173. El 7 de febrero de 1966, se abrió en la Corte Suprema de Salisbury la causa contra veintitrés africanos, acusados de haberse adiestrado secretamente como sabotadores y espías en la URSS y en la República Popular de China. Otro, el vigésimocuarto, fue acusado de ser uno de los principales organizadores de ese plan de adiestramiento. La parte actora afirmó que se habían adiestrado para servir al Peoples Caretaker Council y a la Zimbabwe African People Union (ZAPU), cuyas actividades habían sido declaradas ilegales.

174. La acusación alegó que los veintitrés acusados formaban parte de los cincuenta y dos africanos de Rhodesia del Sur que, entre marzo de 1964 y octubre de 1965, se habían adiestrado en la guerra de guerrillas, el empleo de armas y explosivos, la ciencia política, la interpretación cartográfica y comunicaciones radiofónicas. Los veinticuatro declararon que eran inocentes.

Acontecimientos económicos

Generalidades

175. Se recordará que el 20 de noviembre de 1965 el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 217 (1965) en la cual, entre otras cosas, se exhortó al Gobierno del Reino Unido a que tomara todas las demás medidas apropiadas que resultaran eficaces para eliminar la autoridad de los usurpadores y poner fin inmediatamente al régimen de la minoría en Rhodesia del Sur. En la resolución se encareció también a todos los Estados, entre otras cosas, a que hicieran lo posible

para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur, incluso establecer el embargo sobre el petróleo y sus productos. Las respuestas de los Estados Miembros a esta resolución se han distribuido ya como documentos oficiales de las Naciones Unidas (véanse los párrs. 12 a 16 *supra*). A continuación se da información complementaria sobre las principales novedades relativas a las sanciones económicas y financieras, incluido el embargo sobre el petróleo y sus productos.

Sanciones económicas y financieras adoptadas por el Gobierno del Reino Unido

176. En su exposición del 11 de noviembre de 1965 al Parlamento, relativa a la llamada declaración de independencia del antiguo Gobierno de Rhodesia del Sur (véanse los párrs. 57 a 60 *supra*), el Primer Ministro del Reino Unido anunció también la adopción de sanciones económicas y financieras contra Rhodesia del Sur.

177. Entre las sanciones económicas anunciadas por el Primer Ministro del Reino Unido figuraba la absoluta prohibición de continuar las compras de tabaco de Rhodesia del Sur. También se anunció el propósito de suspender el *Commonwealth Sugar Agreement* en lo respectivo a Rhodesia del Sur y de prohibir toda nueva compra de azúcar procedente de Rhodesia. Además de estas medidas, Rhodesia quedaba excluida, desde aquel momento, de la zona de preferencias del *Commonwealth* y se negó a sus productos el trato preferencial en el Reino Unido. Se suspendieron los *Ottawa Commonwealth Preference Agreements* de 1932 que regían las relaciones comerciales del Reino Unido con Rhodesia del Sur. También se interrumpió la exportación de armas, incluso de piezas de recambio.

178. Las sanciones financieras anunciadas suponían la cesación de toda ayuda del Reino Unido, el apartamiento de Rhodesia del Sur de la zona de la libra esterlina y la prohibición de exportar capital del Reino Unido a Rhodesia del Sur. También se le negó a Rhodesia del Sur el acceso al mercado de capitales de Londres y se introdujeron medidas especiales de control de cambios contra Rhodesia del Sur. Además, el departamento de garantías a las exportaciones dejó de proteger las exportaciones a Rhodesia del Sur.

179. Tras la aprobación de la *Southern Rhodesia Act* de 1965 por el Parlamento del Reino Unido, el 16 de noviembre de 1965 (véase el párr. 61), el Gobierno del Reino Unido publicó varias *Orders in Council* en cuya virtud se suspendía la validez del *Commonwealth Sugar Agreement* en relación con Rhodesia del Sur y se eliminaba además a Rhodesia del Sur de la zona de preferencias del *Commonwealth*. Las demás medidas económicas y financieras adoptadas contra Rhodesia del Sur no requerían nuevas *Orders in Council*, ya que el Gobierno estaba autorizado a introducir las gracias a disposiciones legislativas anteriores.

180. El 1º de diciembre de 1965 el Primer Ministro Wilson informó al Parlamento que el Gobierno había decidido adoptar otras medidas económicas.

181. El Primer Ministro Wilson manifestó que, además de los embargos del tabaco y del azúcar, que representaban el 70% de las exportaciones de Rhodesia del Sur al Reino Unido, los nuevos embargos abarcaban las siguientes exportaciones de Rhodesia del Sur: asbesto, cobre y sus productos, minerales de

hierro y acero y concentrados de antimonio, cromo, litio y tantalio, maíz, carne y productos comestibles de la carne y varios productos alimenticios más. Las nuevas partidas embargadas, sumadas al azúcar y al tabaco cuyo embargo se anunció el 11 de noviembre de 1965, abarcaban el 95% de las exportaciones de Rhodesia del Sur al Reino Unido⁸. El Primer Ministro anunció también que el Reino Unido estaba revisando ciertas partidas de su comercio de exportación con destino a Rhodesia del Sur en los casos en que éstas guardaban relación con los objetivos de conseguir la restauración rápida del gobierno constitucional en Rhodesia del Sur, y también se había puesto en contacto con otros países respecto de dichas partidas.

182. El Primer Ministro Wilson manifestó también que, en cumplimiento de las sanciones económicas aplicadas por el Reino Unido, el Gobierno se mantenía en estrecho contacto con otros países compradores de productos de Rhodesia del Sur en grandes cantidades. El objetivo de estas consultas era privar a las exportaciones de Rhodesia del Sur, en la medida de lo posible, de la salida de que dependían las finanzas del régimen ilegal.

183. El Sr. Wilson anunció también la adopción de otras medidas financieras contra Rhodesia del Sur. En general, con estas medidas financieras se suspendieron prácticamente todos los pagos corrientes por residentes del Reino Unido a residentes de Rhodesia del Sur, salvo los pagos por concepto del reducidísimo comercio de productos permitidos todavía, así como las remesas. El Primer Ministro dijo, además, que si bien las obligaciones contractuales no serían repudiadas, no podrían satisfacerse en las circunstancias actuales. Por el momento se retendría el dinero adeudado a los residentes en Rhodesia del Sur, que se liberaría tan pronto como se restableciera el Gobierno constitucional en Rhodesia del Sur.

184. Las órdenes expedidas el 11 de noviembre en virtud del *Exchange Control Act* de 1947, y las instrucciones transmitidas en virtud de las *Emergency Laws (Re-enactments and Repeals) Act* de 1964, tuvieron por efecto excluir a Rhodesia del Sur de los Scheduled Territories (zona de la libra esterlina) y excluir a los residentes de Rhodesia del Sur y sus cuentas bancarias y títulos de ciertas exenciones y permisos generales aplicables a los residentes de todos los países que no entran en los Scheduled Territories. El Banco de Inglaterra comunicó a los bancos centrales los detalles de estas medidas.

185. Se declaró que por el momento seguirían permitiéndose ciertas transacciones corrientes entre residentes del Reino Unido y residentes de Rhodesia del Sur (por ejemplo, sueldos, salarios, pensiones, intereses y dividendos), pero que las cuentas de Rhodesia del Sur en Londres estarían sujetas a control. No se permitirían las exportaciones de capital del Reino Unido a Rhodesia del Sur, ni en forma de inversiones directas ni mediante la compra de valores de Rhodesia del Sur con fondos destinados a la inversión.

186. También se declaró que el producto de la venta, por residentes de Rhodesia del Sur, de valores en libras esterlinas depositados por ellos en Londres

sólo podría acreditarse contra una cuenta de valores en libras esterlinas de Rhodesia del Sur y utilizarse para reinversión adecuada y supeditada a control, o venderse a otros residentes de Rhodesia del Sur para ese tipo de inversión. Los valores en libras esterlinas de Rhodesia del Sur no podrían venderse contra divisas extranjeras en un mercado de valores de ultramar.

187. El 1º de diciembre de 1965 se anunciaron nuevas medidas de control de cambios, por las que se intensificaban las restricciones ya aplicadas y se suspendían prácticamente todos los pagos corrientes por residentes del Reino Unido a residentes de Rhodesia del Sur, salvo en los casos en que estos pagos estuvieran relacionados con el comercio de mercancías permitidas.

188. Seguirían permitiéndose los pagos en libras esterlinas a cuentas en libras esterlinas de Rhodesia del Sur o desde esas cuentas en Rhodesia del Sur respecto del comercio en mercancías, así como los fletes y seguros relacionados con ese comercio, directamente entre Rhodesia del Sur y países de la zona de la libra esterlina, en la medida en que los gobiernos de los territorios interesados permitieran ese género de comercio. No se permitiría que residentes del Reino Unido actuaran como intermediarios en el comercio de mercancías entre Rhodesia del Sur y ningún otro territorio.

189. En general, en relación con las transacciones corrientes, no se concedería ningún permiso para realizar pagos respecto de viajes, sueldos y salarios, así como pagos contractuales tales como pensiones, intereses y dividendos, por residentes del Reino Unido a residentes de Rhodesia del Sur, hasta que se restableciera el gobierno constitucional en Rhodesia del Sur. Se retendrían las cantidades adeudadas a residentes de Rhodesia del Sur en concepto de pensiones o interés en valores del Gobierno del Reino Unido, que se liberarían en cuanto se pudieran reanudar las relaciones normales. Se aconsejó a las empresas y entidades británicas que adoptaran un procedimiento análogo. No se trataba en absoluto, decía el anuncio, de repudiar esas obligaciones, pero tampoco podían cumplirse en las circunstancias actuales.

190. En general no se concedería permiso alguno a empresas del Reino Unido para efectuar remesas a sucursales de Rhodesia del Sur. No se permitiría que ningún servicio bancario del Reino Unido actuara en representación o en favor de empresas e individuos de Rhodesia del Sur. No concederían facilidades para viajar a Rhodesia del Sur salvo con fines oficiales o comerciales aprobados. Seguirían permitiéndose hasta nueva orden los regalos en dinero de residentes en el Reino Unido a individuos en Rhodesia del Sur hasta un máximo de 50 libras esterlinas.

191. El 14 de diciembre de 1965 el Gobierno del Reino Unido modificó una decisión anterior, de 1º de diciembre de 1965, y autorizó la reanudación de pagos de pensiones del Reino Unido a los militares retirados y a los jubilados de la administración pública de Rhodesia del Sur.

192. El 17 de diciembre de 1965 el Gobierno del Reino Unido impuso nuevas sanciones financieras contra Rhodesia del Sur al insistir en que todas las compras por este país de bienes y servicios del Reino Unido se pagaran en monedas fuertes que no fueran la libra esterlina ni el rand sudafricano. Esta determinación venía a sustituir una orden anterior, de 1º de

⁸ El valor total de las exportaciones nacionales de Rhodesia del Sur ascendió en 1964 a 119.465.000 libras esterlinas, de cuya suma, se exportaron al Reino Unido mercancías por valor de 30.509.022 libras esterlinas.

diciembre de 1965, que permitía el uso de las cuentas de libras esterlinas en Rhodesia del Sur para pagar unas pocas importaciones del Reino Unido y otras exportaciones de la zona de la libra esterlina a Rhodesia del Sur. Actualmente los saldos en esterlinas sólo se pueden utilizar para pensiones y otros pagos. Se comunicó que el Gobierno del Reino Unido había pedido a los demás países de la zona de la libra esterlina que insistieran también en esa clase de pago.

193. En virtud de la *Order in Council* del Reserve Bank of Rhodesia, promulgada el 3 de diciembre de 1965, se suspendió en su cargo al Gobernador y demás consejeros del Banco de Reserva de Rhodesia y se les privó de toda autoridad en relación con el Banco de Reserva. En esa *Order in Council* se nombraba, en su lugar, un nuevo Consejo de Administración.

194. En una declaración del Ministerio de Relaciones con el *Commonwealth*, de fecha 3 de diciembre, se indicó que se estaba informando a los gobiernos y a los bancos centrales de otros países de la formulación de la *Order in Council* y de sus efectos. El nuevo Gobernador del Banco de Reserva, Sir Sidney Caine, procedió a dar las debidas instrucciones a los bancos que tenían cuentas del Banco de Reserva acerca de las autorizaciones que se necesitarían para efectuar operaciones con esas cuentas. El principal objetivo de la *Orden in Council*, según aquella declaración, era conseguir que los haberes del Banco de Reserva de Rhodesia en el extranjero estuvieran protegidos en provecho del pueblo de Rhodesia del Sur, y conseguir el objetivo del Gobierno del Reino Unido de restablecer el gobierno constitucional en Rhodesia del Sur.

195. El 9 de diciembre se manifestó que el nuevo Consejo de Administración había establecido su autoridad sobre los haberes del Banco de Reserva de Rhodesia del Sur en todo el mundo gracias a sus contactos con los bancos centrales. Se comunicó que el nuevo Gobernador del banco había dicho en esa misma fecha que ningún banco central ni gobierno había puesto en tela de juicio la autoridad del nuevo Consejo de Administración.

196. En virtud de la *Southern Rhodesia (Bank Assets) Order* de 1965, que entró en vigor el 7 de diciembre, se autorizó a la Tesorería a exigir de cualquier banco que proporcionase información acerca de todos los haberes en su poder en cualquiera de sus establecimientos del Reino Unido, y en todo momento a partir del 11 de noviembre, en nombre de cualquier establecimiento de Rhodesia del Sur de cualquier banco.

197. En el momento de la declaración ilegal de independencia se calculaban en 23.500.000 libras esterlinas los haberes del Banco de Reserva de Rhodesia del Sur. Se informó que unos 10 millones de libras esterlinas de este total constituían un saldo en esterlinas depositado en Londres. Se tenía entendido que este volumen quedó efectivamente bloqueado en el Reino Unido. Se informó además que 3.500.000 libras esterlinas, por lo menos, de los haberes de reserva se encontraban en Rhodesia del Sur en el momento en que el Reino Unido bloqueó los haberes del Banco de Reserva de Rhodesia del Sur. Se informó que el Gobernador a la sazón del Banco de Reserva de Rhodesia del Sur había manifestado el 17 de noviembre que un mínimo de 12 millones de libras esterlinas de las reservas estaban depositados fuera del Reino Unido, en diversos países.

198. Se informó que el Sr. Ian Smith había manifestado el 11 de diciembre de 1965 que, aunque el Reino Unido había intervenido 9 millones de libras esterlinas de las reservas monetarias de Rhodesia del Sur depositadas en Londres, era poco probable que el Gobierno del Reino Unido encontrase los 13 millones de libras esterlinas restantes.

Embargo de petróleo impuesto por el Gobierno del Reino Unido

199. El Gobierno del Reino Unido impuso contra Rhodesia del Sur un embargo total sobre el petróleo el 17 de diciembre de 1965. En virtud de la *Southern Rhodesia (Petroleum) Order* de 1965, que entró en vigor el 17 de diciembre, el Reino Unido, en ejercicio de los poderes que le confiere la *Southern Rhodesia Act* de 1965, prohibió la importación de petróleo y sus productos en el Territorio. También prohibió a los nacionales del Reino Unido que suministraran o transportaran productos del petróleo destinados a Rhodesia del Sur.

200. El Primer Ministro Wilson hizo el 20 de diciembre de 1965 una declaración en el Parlamento acerca del embargo del petróleo impuesto contra Rhodesia del Sur. Manifestó, entre otras cosas, que el objetivo del embargo sobre el petróleo era conseguir que se restableciera el régimen constitucional en Rhodesia del Sur. Dijo que ello provocaría grandes dificultades y problemas, pero que era esencial para conseguir una solución rápida de la crisis de Rhodesia del Sur y evitar el peligro de una intervención del exterior.

Otras sanciones económicas y financieras adoptadas por el Reino Unido

201. El 20 de enero de 1966 el Gobierno del Reino Unido asumió poderes en virtud de la *Southern Rhodesia (Prohibited Exports and Imports) Order* de 1966 para embargar el comercio de Rhodesia del Sur en cualquier producto. La orden citada prohíbe la exportación desde Rhodesia del Sur o la importación a Rhodesia del Sur de los productos que se citan en ella. El Ministerio de Relaciones con el *Commonwealth* confirmó que dicha orden era efectiva en virtud de las leyes del Reino Unido y de Rhodesia del Sur y se aplicaría a los exportadores británicos. La cláusula relativa a las penas dice que toda persona culpable de contravenir la orden podrá, si la infracción es menos grave, ser condenada a una pena de encarcelamiento hasta un máximo de seis meses o a multa hasta un máximo de 500 libras esterlinas, o a ambas penas, y que si la infracción es más grave, se aplicarán las penas más elevadas de las arriba indicadas. En el caso en que la persona culpable sea una sociedad anónima, y se demuestre que la infracción se ha cometido con el consentimiento o la complicidad de un consejero, director, secretario u otro empleado de categoría análoga, o con su complicidad, la pena se impondrá a tales persona o personas.

202. Salvo en los casos en que esté autorizado por los reglamentos oficiales, no se permitirá a nadie firmar o cumplir contrato alguno para la exportación desde Rhodesia del Sur o la importación a Rhodesia del Sur de ninguno de los productos indicados; ni firmar o cumplir ningún contrato para la venta de ninguno de los productos indicados que pretenda, o tenga motivos para creer que otra persona pretende, exportar de Rho-

desia del Sur o importar a Rhodesia del Sur. La orden anularía también todo contrato de exportación de Rhodesia del Sur o importación a Rhodesia del Sur de las mercancías indicadas, háyase firmado el contrato antes o después de la promulgación de la Orden (20 de enero de 1966); anularía asimismo toda transferencia de propiedades o interés en productos en cumplimiento de cualquier contrato de esa índole.

203. Se comunicó que el Gobierno del Reino Unido esperaba que los gobiernos extranjeros reconocieran su autoridad legal (en virtud de la *Southern Rhodesia (Prohibited Exports and Imports) Order* de 1966) para imponer este embargo, como ya habían reconocido en lo respectivo al embargo sobre el petróleo.

204. En virtud de una *Order in Council* de 20 de enero de 1966, el Gobierno del Reino Unido declaró ilegal la venta de cromo de Rhodesia del Sur. A partir de ese momento todo comprador cometería un acto ilegal. Se comunicó que el motivo de la prohibición inmediata de la venta del cromo era que se había tropezado con ciertas dificultades para impedir que lo comprasen los importadores de los Estados Unidos, que adquieren la mayor parte de las exportaciones de mineral de cromo de Rhodesia del Sur, el valor de las cuales asciende a 2 millones de libras esterlinas.

205. El 28 de enero de 1966, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a los importadores de los Estados Unidos que dejaran de comprar cromita de Rhodesia del Sur. Al anunciar esta petición, el Departamento dijo que se basaba en el reconocimiento de la autoridad del Gobierno del Reino Unido para prohibir la exportación de cromita de Rhodesia del Sur.

206. El 30 de enero de 1966 el Gobierno del Reino Unido impuso una prohibición total sobre las exportaciones con destino a Rhodesia del Sur, salvo lo esencial a fines humanitarios, para las necesidades esenciales de las Joint Central African Organizations y de las mercancías puestas en el muelle y ya pagadas. También se amplió la prohibición de importar mercancías de Rhodesia del Sur al Reino Unido (por encima del 95% anunciado el 1º de diciembre de 1965), de forma que abarcara todas las importaciones de Rhodesia del Sur.

207. En 1964 Rhodesia del Sur importó mercancías del Reino Unido por valor de 33.379.446 libras esterlinas (o sea, el 30,43% del volumen total de importaciones de Rhodesia del Sur) y el valor de las exportaciones de Rhodesia del Sur al Reino Unido ascendió a 31.164.268 libras esterlinas (o sea, el 21,56% del total de sus exportaciones), y en esta cifra las exportaciones de tabaco y azúcar representaron por sí solas 22 millones de libras.

208. El 30 de enero de 1966 el Gobierno del Reino Unido publicó una advertencia al pueblo de Rhodesia del Sur y a los demás gobiernos en el sentido de que no se haría responsable por el dinero que se pudiera prestar al régimen de Smith con posterioridad a su declaración ilegal de la independencia el 11 de noviembre de 1965. El Tesoro del Gobierno del Reino Unido manifestó que toda persona que prestara dinero o diese cualquiera otra forma de crédito al régimen de Smith lo haría por su propia cuenta y riesgo. Una vez que se restableciera el Gobierno constitucional en Rhodesia del Sur, el Gobierno legal no estaría obligado a

aceptar responsabilidades que se declarasen contraídas por el régimen ilegal y no podría esperarse de él que aceptara tales responsabilidades.

209. Parecía que la advertencia se dirigía especialmente a quienes pudieran sentirse inclinados a invertir en los "bonos de independencia" de Rhodesia del Sur emitidos por el régimen de Smith el 1º de febrero de 1966. También se dijo que esta advertencia se dirigía a Sudáfrica y a algunas otras naciones y era aplicable asimismo a todo intento del régimen ilegal de conseguir dinero fuera de Rhodesia del Sur.

210. El 7 de febrero de 1966 el Gobierno del Reino Unido publicó una orden que prohibía la exportación de tabaco de Rhodesia del Sur y la venta de tabaco en Rhodesia del Sur con miras a su exportación. En virtud de esta orden actualmente la compra por comerciantes o especuladores de tabaco de Rhodesia del Sur y su almacenamiento hasta que se restablezca el Gobierno legítimo constituye un delito en virtud de las leyes del Reino Unido y de Rhodesia del Sur.

211. En una declaración oficial publicada el 7 de febrero de 1966, el Ministerio de Relaciones con el *Commonwealth* anunció que dicha orden convertía en ilegal la compra de tabaco por especuladores u otros, así como su depósito en Rhodesia del Sur o en algún otro lugar con la esperanza de venderlo provechosamente cuando se restableciera el Gobierno legítimo. Quienes compraran tabaco en contravención de la orden no tendrían ningún derecho legítimo a ese tabaco y tampoco podrían recuperar su dinero. La declaración añadía que a partir de ese momento todas las transacciones realizadas en Rhodesia del Sur con miras a la exportación de tabaco eran nulas, debiese la exportación efectuarse inmediatamente o en el porvenir.

212. En virtud de dicha orden, una vez restablecido el Gobierno legítimo, las reservas de tabaco compradas ilegalmente tendrían que volverse a vender antes que pudieran importarse. Sólo se exportaría el tabaco vendido legalmente, con un sistema de licencias de exportación; de igual modo, sólo se permitiría la entrada en el Reino Unido del tabaco vendido legalmente.

213. Se informó que el objetivo manifiesto de esta orden era dirigir una clara advertencia a todos los comerciantes de terceros países que pudieran tener el propósito de comprar la cosecha del año en curso.

Contramedidas adoptadas por Rhodesia del Sur

214. El 16 de noviembre de 1965, el Gobernador del Banco de Reserva de Rhodesia (reconocido por el régimen ilegal) anunció que el Banco compraría toda la producción de oro del país que hasta entonces se vendía en el Reino Unido. En 1964 las exportaciones de oro pasaron de 7 millones de libras esterlinas. Se comunicó que el Banco de Reserva no había vendido ninguna cantidad de oro hasta la fecha y que éste estaba empleándose como cobertura para la libra de Rhodesia del Sur.

215. El 30 de noviembre de 1965 Rhodesia del Sur anunció la abolición de las preferencias con los países del *Commonwealth* para las importaciones del Reino Unido con destino a Rhodesia del Sur. Según esa declaración Rhodesia del Sur podría, gracias a esta medida, tratar de concluir arreglos comerciales amistosos con países hasta entonces excluidos de la participación

en arreglos especiales conforme al régimen de preferencias para los países del *Commonwealth*.

216. El 2 de diciembre de 1965 Rhodesia del Sur anunció que había adoptado sanciones financieras contra el Reino Unido para contrarrestar las que aplicó ese país contra ella. Con arreglo a esas sanciones financieras, Rhodesia del Sur bloqueó también las cuentas del Reino Unido en Rhodesia del Sur. En virtud de las restricciones financieras, los pagos de intereses, alquileres, dividendos, utilidades y otros ingresos así como el reembolso de capital de residentes del Reino Unido se ingresará a las cuentas bloqueadas, hasta que se restablezcan las relaciones financieras normales; se reducirán los pagos para el mantenimiento de parientes en el Reino Unido, y esa reducción dependerá del daño que ella pueda entrañar; se requerirá una autorización para débitos o créditos de fondos en las cuentas bancarias de los residentes en el Reino Unido; los residentes del Reino Unido que trabajan en Rhodesia del Sur con un contrato de tres años no podrán remitir automáticamente sus ingresos al extranjero; y los regalos en dinero a los residentes en el Reino Unido se limitarán a 50 libras.

217. El 4 de diciembre de 1965 el Sr. Smith declaró que, en vista de que el Reino Unido había intervenido las reservas de Rhodesia del Sur en Londres, no le sería posible a Rhodesia del Sur cumplir sus obligaciones relativas a la deuda pública en Londres ni en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El 8 de diciembre de 1965 afirmó que, puesto que el Gobierno del Reino Unido había intervenido las reservas de Rhodesia del Sur en Londres, también debía pagar la deuda exterior de Rhodesia del Sur.

218. El 8 de diciembre de 1965 la Tesorería del Reino Unido declaró que el Gobierno británico no estaba obligado a pagar las deudas del Gobierno de Rhodesia del Sur.

219. El 8 de diciembre de 1965 el Sr. Smith manifestó en una emisión radial que las importaciones procedentes del Reino Unido, que en la actualidad ascendían a 35 millones de libras esterlinas, serían reducidas a una cantidad relativamente insignificante y que era inevitable que esa modificación durara mucho. Añadió que Rhodesia del Sur estaba elaborando acuerdos relativos a los pagos para eludir al Reino Unido. En esa declaración reiteró que había sido bloqueado el pago de intereses, alquileres, dividendos y utilidades, así como el reembolso de capital de Rhodesia del Sur a nacionales del Reino Unido, lo cual había causado una pérdida, por concepto de "invisibles", de 26 millones de libras esterlinas.

220. En una comunicación de la Tesorería de Rhodesia del Sur de 8 de diciembre de 1965, relativa a las medidas de control de cambios, se declaró que los pagos a Rhodesia del Sur, sea cual fuere su propósito, por residentes de la zona de la libra esterlina, con exclusión de Sudáfrica y el Reino Unido, no se harían efectivos en libras esterlinas sino en dólares de los EE. UU. o del Canadá, o en alguna moneda de Europa occidental. Los pagos por exportaciones de Rhodesia del Sur a Malawi y Zambia tendrían que hacerse en su totalidad y en una de las monedas aprobadas antes que se despacharan los bienes. Las exportaciones a otros países, fuera de Malawi y Zambia, no podrían salir del país hasta que las aduanas de

Rhodesia del Sur comprobaran, mediante certificado autorizado del comerciante, que los pagos se habían efectuado o se efectuarían en el plazo de seis meses, en una moneda apropiada. Se dijo que un funcionario de la Tesorería de Rhodesia del Sur había explicado que con el nuevo reglamento los pagos efectuados en libras esterlinas no servirían sino para aumentar las cuentas de Rhodesia del Sur, bloqueadas efectivamente por el Gobierno del Reino Unido.

221. El 28 de enero de 1966, el "Ministerio de Información" de Rhodesia del Sur anunció que la libra de Rhodesia del Sur sería valorada en la actualidad con arreglo al patrón oro y no a la libra esterlina, como se hacía en el pasado. Declaró además que la nueva paridad de la libra de Rhodesia del Sur con el oro seguiría siendo la misma y que no había cambiado el valor de la libra de Rhodesia del Sur en relación con otras monedas. También se dijo que el "Ministerio" había declarado la total desvinculación de la libra de Rhodesia del Sur con la libra esterlina y que ello significaba que ya no estaba obligada a aplicar ningún ajuste que se hiciera en la paridad de cambio de la libra esterlina.

Medidas internas económicas y financieras introducidas en Rhodesia del Sur después de la declaración ilegal de independencia

222. La economía de Rhodesia del Sur ha sufrido alguna reorganización interna desde la declaración ilegal de la independencia. Lo dicho por ciertos funcionarios del régimen ilegal de Rhodesia del Sur confirma que esas modificaciones resultaron necesarias a raíz de las sanciones internacionales aplicadas a Rhodesia del Sur.

223. El 11 de noviembre el régimen ilegal anunció que se había intensificado el control sobre la importación y la exportación. Se declaró que el problema inmediato que se planteaba a Rhodesia del Sur era el de contar con cantidades suficientes de productos básicos (tales como trigo, abastecimientos médicos y veterinarios, gasolina, petróleo y lubricantes), procurarse las divisas para pagar los suministros y sostener las actividades económicas. Se manifestó que el control sobre la exportación tenía por fin proteger las actuales existencias de productos esenciales en el país. Se preveía la facultad para implantar el racionamiento, si resultase necesario; además, la suma autorizada para viajes de recreo se reduciría de 300 a 100 libras anuales, y se suprimiría la venta de giros postales pagaderos fuera de Rhodesia del Sur. Se ha prohibido que los residentes de Rhodesia del Sur compren valores extranjeros a no residentes. Sigue permitido el pago de pensiones a los titulares radicados en el extranjero así como el de otras remesas normales al extranjero (incluso utilidades, alquileres y repatriación de capital).

224. El 16 de noviembre se anunció en Salisbury el aumento de los derechos de aduana y del impuesto sobre cigarrillos, tabaco, cerveza, vinos y licores. Se comunicó que el 6 de diciembre el Sr. Wrathall, "Ministro de Finanzas" del régimen ilegal, había previsto nuevos aumentos en los impuestos y además había dicho que se estaban examinando los programas de gastos con objeto de crear empleos para ayudar a contrarrestar el efecto de las sanciones impuestas por el Reino Unido.

225. El 18 de noviembre se anunció que el Sr. Smith había establecido una organización en la que participarían tanto funcionarios como representantes de los sectores de negocios, agricultura y minería para hacer frente a las sanciones impuestas a Rhodesia del Sur y ayudar a sostener la economía. Esa organización tendría tres comités: comercio e industria, agricultura y minería.

226. El 24 de noviembre de 1965 el Gobernador del Banco de Reserva de Rhodesia (reconocido por el régimen ilegal) anunció amplias medidas encaminadas a limitar el crédito y proporcionar al mismo tiempo fondos adicionales para el sistema bancario. Según la declaración de dicho Banco, esa acción tendrá por resultado la liberación inmediata de recursos en efectivo por valor de 2.760.000 libras esterlinas. Se explicó además que esas medidas se habían tomado porque los bancos en Rhodesia del Sur ya no disponían de los recursos habituales que solían tener a su alcance.

227. De conformidad con la declaración, se pidió a los bancos que se ciñeran a una pauta consistente en seis puntos y encaminada a reducir al máximo el crédito a particulares. En ninguna circunstancia debían dar facilidades para la compra de bienes de consumo. Los créditos también debían quedar reducidos a las empresas de distribución, pero debía examinarse favorablemente la situación de los pequeños comerciantes para evitarles la necesidad de cerrar. Con respecto a la cuestión agrícola, el Banco de Reserva pidió que se mantuviera el nivel actual del crédito y, en el caso de los cultivadores de tabaco, que se continuara prestando ayuda a los que ya habían invertido cantidades considerables para la cosecha de 1966. Sin embargo, había que pedirles que redujeran sus gastos al nivel más bajo posible, y alentarlos, en los casos en que eso fuera factible, a cambiar el cultivo del tabaco por el de otros productos. En la declaración se añadía que las facilidades de crédito debían extenderse para la producción de bienes esenciales que eliminaran o redujeran la demanda de artículos importados.

228. El Sr. G. W. Rudland, "Ministro de Comercio e Industrias", anunció el 1º de diciembre de 1965 que se tomarían medidas para apoyar la industria azucarera y contrarrestar toda consecuencia desfavorable de las sanciones. Anunció un aumento del 20% del precio interno del azúcar y declaró que, gracias a esta medida, Rhodesia del Sur proseguiría la producción de 350.000 toneladas cortas, de acuerdo con los planes adoptados. Declaró que con esta medida se mantendría el empleo total en la industria azucarera, la cual empleaba directamente a 30.000 personas y contribuía al sostén de unas 150.000 más.

229. El 16 de noviembre de 1965, Lord Graham, "Ministro de Agricultura", aconsejó a los tabacaleros que continuaran normalmente el trabajo en los tabacales o en tierras definitivamente dedicadas al cultivo del tabaco, pero que si tenían posibilidades de obrar de otra manera consultaran con los funcionarios locales de divulgación acerca de la posibilidad de dedicar a otros cultivos las tierras aún no destinadas a ese producto.

230. El 24 de noviembre de 1965, Lord Graham, en otra declaración, dijo que los tabacaleros harían muy mal en desatender su consejo de dedicar a otros productos las tierras aún no destinadas al cultivo del tabaco. Se refería a la noticia de que las compañías

compradoras de tabaco de Rhodesia del Sur iban a emprender una intensa campaña de comercialización para superar las sanciones en lo relativo al tabaco. Aconsejó encarecidamente a los productores que disminuyeran la actividad lo bastante como para reducir a 200 millones de libras la cosecha de tabaco, que originalmente se había previsto en 280 millones de libras.

231. El 7 de diciembre de 1965 se publicó en Salisbury un reglamento de emergencia por el que se declaró que las actividades financieras, comerciales e industriales de Rhodesia del Sur constituían servicios esenciales, y se establecería el control de las empresas y sociedades de capital, incluso los bancos y compañías de seguros, por medio de un custodio que tendría poderes para despedir o nombrar directores o empleados.

232. Según una declaración del régimen ilegal, esos poderes serían facultativos y se tomaban para asegurarse de que toda compañía que trabajase en Rhodesia del Sur, incluso la filial o sucursal de una compañía extranjera, que sufriese una presión indebida del extranjero, actuase sólo en favor de los intereses de Rhodesia del Sur. El 29 de enero de 1966 se informó que ascendía a ocho el número de compañías controladas en virtud del reglamento de emergencia.

233. A fin de contrarrestar el desempleo creado en Rhodesia del Sur por las sanciones internacionales en el plano financiero y económico, el Sr. John Wrathall, "Ministro de Hacienda", anunció el 6 de diciembre de 1965 la adopción de otras medidas destinadas a incrementar el empleo. Declaró que el Ministerio de Caminos se proponía utilizar maquinaria en vez de trabajadores en todo lo posible a fin de crear 1.500 empleos. Declaró también que se aceleraban los trabajos de edificación y que se concedía alta prioridad a las obras que creaban muchos empleos y requerían una alta proporción de material local.

234. El Sr. Ian Smith declaró por radio el 8 de diciembre de 1965 que diversas restricciones impuestas por el Reino Unido causarían inevitablemente problemas de desempleo en ciertos sectores de la comunidad. Declaró que, además de las medidas que se tomaban para dirigir la economía, se dispondría la preparación de planes de servicio nacional a fin de hacer frente a la posible situación de desempleo. Dijo asimismo que los trabajadores que no fueran absorbidos por los planes de servicio nacional y que quedaran sin empleo a consecuencia de la presión económica ejercida por el Reino Unido, se emplearían en trabajos que actualmente desempeñaban trabajadores extranjeros y que estos últimos serían reemplazados y repatriados.

235. El 17 de diciembre de 1965, el "Gobierno de Rhodesia del Sur" ordenó al Banco de Reserva de Rhodesia (reconocido por el régimen ilegal) que dejara de publicar estados semanales de activos y pasivos en que aparecía el valor de los activos extranjeros. Según una declaración del Banco, se le había ordenado que dejara de publicar los estados en virtud del reglamento de emergencia. El 22 de diciembre de 1965, Rhodesia del Sur dejó de publicar detalles sobre la forma en que contrarrestaba las sanciones internacionales. En una declaración titulada "Gracias al secreto se salvan vidas", el "Ministerio de Información" dijo que la publicación de esas noticias perjudicaba los intereses nacionales. La publicidad ayudaría y estimularía a los antagonistas de Rhodesia del Sur a tomar contramedidas y a poner en situación embarazosa a los amigos del país. Subrayó que este silencio podría salvar a la nación.

236. El 19 de enero de 1966 la Junta de Comercialización del Tabaco de Rhodesia anunció la implantación de nuevas normas para las subastas de tabaco de Rhodesia del Sur a partir de marzo de 1966. Dicha Junta manifestó que se haría una clasificación previa del tabaco y que se fijaría un precio de reserva para cada calidad. La clasificación sería hecha por dos clasificadores independientes bajo la fiscalización de un clasificador superior. Los clasificadores cumplirán sus tareas en completo aislamiento. Ni los compradores ni los productores podrían apelar de la clasificación que se hiciera. Se tomaría una serie de medidas para asegurarse de que los clasificadores no tuvieran la menor idea de a quién pertenecía el tabaco que clasificarán. Una vez clasificado, el tabaco se pondría en poder de una sociedad tabacalera.

237. La hoja se ofrecería entonces en uno o dos lugares de subasta al precio de reserva o a un precio superior a éste, y la sociedad tabacalera tomaría al precio de reserva las cantidades que no se vendiesen. La sociedad mantendría estas cantidades en un fondo común y se encargaría de colocarlas. Finalmente, asumirá la responsabilidad de distribuir equitativamente entre los cultivadores el producto de las ventas.

238. Aunque la hoja del cultivador se vendiera por encima del precio de reserva, sólo se le pagaría el precio de reserva. El excedente se acreditará a un fondo común y se distribuiría entre los productores. Habría otro fondo común para el tabaco curado al humo y el de la variedad "burley".

239. El 29 de enero de 1966, el "Ministerio de Comercio e Industrias" del régimen ilegal anunció que se aumentarían en un 20% las divisas disponibles para la importación de mercancías en el segundo período de cuota, del 31 de abril al 31 de julio de 1966. En la declaración se añadía que el Ministerio había adoptado disposiciones estrictas para la distribución de divisas en ese período. Se daría prioridad a las importaciones de suministros esenciales. En segundo lugar figurarían los materiales y suministros para la industria, especialmente de los que produjesen mayores ingresos en divisas con la manufactura de bienes de capital para la exportación. Se aumentaría la cuota de la industria en general, para el comercio de reexportación y para las importaciones de los comerciantes.

240. Después de la prolongación del estado de emergencia en Rhodesia del Sur (véanse los párrs. 170 y 171 *supra*), el régimen de Smith publicó en la gaceta oficial, el 5 de febrero de 1966, una nueva serie de medidas de emergencia para consolidar su dominio sobre la mayoría de los sectores de la actividad económica de Rhodesia del Sur. Tales medidas comprenden el control de las sociedades de capital, la inversión de fondos bloqueados, la publicación de estados financieros, el control de mano de obra, el control de bienes y servicios, el mantenimiento de precios, la distribución de productos del petróleo, las atribuciones de las autoridades locales en materia de contratación de empréstitos e incautación de medios y equipo de transporte.

241. Dichas disposiciones comprenden lo siguiente:

a) *Emergency Powers (Control of Corporations) Regulations, 1966*, que además de dar poderes al "Ministerio" para "designar" a una sociedad, le autoriza a disponer que una sociedad "le presente en la forma que le especifique, informaciones relativas a la dirección de

los negocios de la sociedad que considere necesarias para determinar si se ha de designar o no a una sociedad". El Ministerio nombrará a un "custodio", funcionario superior del Tesoro, para que desempeñe las facultades que le concede el reglamento respecto de una compañía designada. El reglamento autoriza al custodio a ajustar la estructura de capital de una sociedad designada, a controlar su personal y "dar las órdenes que juzgue necesarias o convenientes respecto a la dirección de las actividades de la sociedad...".

b) En virtud de *The Emergency Powers (Control of Manpower) No. 2 Regulations* se dan al "Ministro" — en este caso el "Ministro de Trabajo" — amplias facultades respecto a la política de mano de obra de una industria controlada.

c) Por *The Emergency Powers (Publication of Financial Statements) Regulations, 1966*, se dan al "Ministro de Hacienda" atribuciones para suspender la publicación de los estados ordinarios que se requiere del Banco de la Reserva en virtud de la *Reserve Bank of Rhodesia Act*, de 1964.

242. El 11 de febrero de 1966, el régimen ilegal publicó órdenes de extender las zonas cerradas de trabajo a todas las partes de Rhodesia del Sur, salvo los cinco distritos de la frontera oriental de Rhodesia del Sur. Según esas órdenes, cometen un acto ilegal los empleadores de fuera de aquellos cinco distritos que dan trabajo a africanos extranjeros que ingresen en Rhodesia del Sur a partir del 11 de febrero de 1966. Conforme a una declaración oficial, la finalidad de esas órdenes es crear oportunidades de empleo para los africanos de Rhodesia del Sur. Las órdenes no atañen a africanos extranjeros que ya estuviesen trabajando en Rhodesia del Sur. Se calcula que trabajan en Rhodesia del Sur cerca de 200.000 africanos extranjeros, procedentes principalmente de Malawi y de Zambia.

243. El 11 de febrero de 1966, el "Ministro de Trabajo, Bienestar Social y Sanidad" hizo una declaración sobre la situación de Rhodesia del Sur en materia de empleo a partir del 11 de noviembre de 1965, en la cual manifestó que la situación general era mejor de lo que la mayoría había esperado.

244. Dijo que la finalidad del nuevo reglamento sobre la mano de obra consistía, primero, en lograr que las industrias interesadas pudieran seguir funcionando conforme al interés nacional y que hubiese suficiente mano de obra para mantener la producción en el nivel debido; y, segundo, en mantener en el empleo al máximo de personas durante el mayor tiempo posible.

245. Respecto a la situación del empleo, el "Ministro" dijo que, en efecto, era cierto que había habido muchos cambios en la estructura del empleo en diversos sectores de la economía después del 11 de noviembre de 1965. Si bien era evidente que el comercio había sufrido en cierta medida, la evolución de la industria daba origen a nuevas oportunidades de trabajo. El *statu quo* se mantenía en lo posible y, cuando no lo era, se llevaba a cabo una redistribución de los recursos de mano de obra en las ramas de actividad afectadas.

246. El 23 de febrero de 1966, el régimen de Rhodesia del Sur tomó nuevas medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones aplicadas al publicarse la ley denominada *Emergency Powers (Industrial Relations) Act*. Se dio al "Ministro de Trabajo" el derecho de suspender determinadas disposiciones de los convenios in-

dustriales concertados en conformidad con la *Industrial Conciliation Act*, a pedido de los empleadores. Esa facultad abarca el comercio y la industria en la mayoría de sus aspectos, pero no la agricultura y los ferrocarriles. Los empleadores pueden pedir ahora la modificación de condiciones relativas a las horas de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo, las vacaciones y la remuneración establecidas en los actuales convenios. La finalidad es permitir que los patronos modifiquen temporalmente las condiciones de empleo, en vez de despedir a los trabajadores.

Rhodesia del Sur y el embargo de petróleo

247. Se recordará que el Consejo de Seguridad, por la resolución 217 (1965), del 20 de noviembre de 1965, encareció a todos los Estados, entre otras cosas, que hicieran lo posible para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur, incluso establecer el embargo sobre el petróleo y sus productos (véase el párr. 12 *supra*). Se recordará también que el Reino Unido impuso un embargo total del petróleo a Rhodesia del Sur el 17 de diciembre de 1965 (véase el párr. 199 *supra*), por el cual se prohibía la importación de petróleo y productos del petróleo en Rhodesia del Sur.

248. Se calcula que el consumo normal de petróleo de Rhodesia del Sur asciende a 400.000 toneladas por año, o sea, aproximadamente, 300.000 galones diarios, que representan sólo un 27% de las necesidades de energía de Rhodesia del Sur. La industria y la agricultura de Rhodesia del Sur trabajan con carbón (63%) y energía eléctrica de la presa de Kariba (10%).

249. Durante 1964 las necesidades de petróleo de Rhodesia del Sur se satisficieron mediante importaciones procedentes en gran parte del Golfo Pérsico. Después, esas necesidades (como también las de Zambia) se han cubierto mediante la producción de la refinería de la Central African Petroleum Refineries Ltd. (CAPREF) en Rhodesia del Sur, situada en Feruka, cerca de Umtali. El petróleo crudo destinado a la refinería se ha entregado por cuenta de la CAPREF en el puerto de Beira, Mozambique, por diversas compañías que poseen acciones de la CAPREF, y se ha transportado por oleoducto desde Beira hasta la refinería. La CAPREF pertenece íntegramente a intereses extranjeros, a saber: 20,75%, Shell Petroleum Co. Ltd. (Reino Unido y Países Bajos); 20,75%, British Petroleum Co. Ltd. (Reino Unido); 17,75%, Mobil Petroleum Co. Ltd. (Estados Unidos); 15,75%, Caltex Ltd. (Estados Unidos); 15%, American Independent Oil Co. (Estados Unidos); 5% Kuwait National Petroleum Co. (Kuwait); y 5%, Total Oil Products Rhodesia Pet. Ltd. (Francia).

250. Las operaciones de la refinería dependen de las circunstancias en que se hallan sus accionistas, los cuales son a la vez distribuidores de productos del petróleo en Rhodesia del Sur y productores de petróleo crudo en otras zonas de las cuales se saca petróleo crudo para la refinería de Rhodesia del Sur⁷.

251. Después que el Consejo de Seguridad aprobó su resolución, todos los gobiernos de los países a que pertenecían los accionistas de la Central African Pe-

troleum Company impusieron el embargo sobre el petróleo destinado a Rhodesia del Sur. De ahí que todas las compañías que participan en actividades normales de suministro de petróleo a Rhodesia del Sur se hallen bajo el apremio de no contravenir el embargo sea directamente, por disposiciones o consejo de sus propios gobiernos, sea indirectamente, para mostrar que reconocen la actitud de sus gobiernos y los gobiernos de países exportadores de petróleo, expresada por medidas de embargo. Entre otros países productores de petróleo, el Irán, que corrientemente suministra petróleo crudo a la CAPREF, también ha impuesto el embargo sobre petróleo destinado a Rhodesia del Sur.

252. Para contrarrestar cualesquiera consecuencias adversas que pudiera tener inmediatamente la refinería por el embargo del petróleo, el régimen de Smith adoptó disposiciones de emergencia, el 21 de diciembre de 1965, en virtud de las cuales ningún empleado de la Central African Refining Company o compañías distribuidoras podía ser despedido o podía renunciar sin el consentimiento previo del Ministerio de Trabajo.

253. Se informó que el último cargamento de petróleo crudo consignado a la CAPREF llegó a Beira a mediados de diciembre de 1965, antes del embargo del Reino Unido. Las operaciones posteriores de la refinería se limitaron al petróleo crudo almacenado en Beira (desde el 31 de diciembre no se ha transportado petróleo crudo por el oleoducto) y al petróleo crudo y en elaboración almacenado en la refinería. Por consiguiente, la refinería clausuró sus instalaciones a mediados de enero. (No se sabe con certeza la fecha exacta, pues es posible que varias instalaciones puedan funcionar independientemente según la corriente interna de petróleo en elaboración.) La reanudación de las operaciones evidentemente dependería de que se pudieran hacer arreglos para obtener petróleo crudo de otras fuentes de abastecimiento.

254. El régimen de Rhodesia del Sur inició el control de la distribución de petróleo el 19 de diciembre de 1965, es decir, dos días después de que el Gobierno británico dispusiera el embargo de otros suministros de petróleo. En esa fecha se pidió a las compañías petroleras que limitaran, al promedio semanal suministrado en los tres meses precedentes, las entregas semanales de gasolina y gasóleo para automóviles a garajes y otros lugares de venta al por menor.

255. El racionamiento se inició oficialmente el 28 de diciembre. Se permite a los conductores particulares obtener de 3 a 5 galones imperiales por semana para cada coche, según el tamaño de éste. La ración de los usuarios comerciales quedó limitada a entre 5 y 20 galones por semana, según el tamaño del vehículo comercial; no se racionó el consumo de gasóleo para automóviles. Se eximió del racionamiento a otros consumidores, y no se aplicaron medidas de control a otros productos del petróleo.

256. El 4, el 11, el 18 y el 25 de enero se impusieron, sucesivamente, medidas más rigurosas de racionamiento a los consumidores de petróleo. Las raciones de gasolina fueron reducidas considerablemente; el racionamiento se extendió al gasóleo para automóviles y a los combustibles de aviación; y se aplicó también a los agricultores el sistema de racionamiento.

257. A mediados de enero parecía que el consumo de petróleo se había reducido a unos dos tercios de lo

⁷ Salvo la American Independent, que produce petróleo crudo pero no lo distribuye en Rhodesia del Sur, y la Kuwait National Petroleum Co., que no tiene ni mercados en Rhodesia del Sur ni producción de petróleo crudo.

normal, y quizás a un poco menos. Las restricciones más severas eran las aplicadas a los conductores particulares; las restricciones eran mínimas o insignificantes para usos finales indispensables. Pero a fines de enero el efecto del racionamiento se hizo sentir mucho más al aplicarse nuevas medidas. Los restantes consumidores exentos de racionamiento eran los ferrocarriles del Gobierno, las líneas aéreas, las radioemisoras y las redes de suministro de energía.

258. El 17 de enero de 1966, el Sr. Ian Smith dijo en una entrevista que Rhodesia del Sur seguía recibiendo petróleo a pesar del embargo. No quiso decir cuánto petróleo se recibía ni cómo superaba el embargo su régimen. Manifestó que el embargo del petróleo había causado ciertas dificultades a su régimen por un tiempo pero que se habían concebido nuevos planes y que él estaba convencido de que este problema se resolvería, al igual que varios otros.

259. El 31 de enero de 1966 un camión sudafricano llevó 6.000 galones de combustible de motor a Rhodesia del Sur. Se dijo que una empresa comercial privada hacía la entrega, que quizás llegara a convertirse en un servicio diario. El 11 de febrero de 1966 se volvió a informar que se había suministrado al ejército y a la policía de Rhodesia del Sur gasolina procedente de Sudáfrica. El 15 de febrero de 1966 se entregó a Lord Graham, "Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores", en el centro municipal de Salisbury, un embarque de gasolina de Sudáfrica. Se dijo que la gasolina, calculada en 1.400 galones, era una donación de los habitantes y la Candour League de la población sudafricana de Stellenbosch.

260. En una declaración hecha por la radio a todo el país el 10 de febrero de 1966, el Sr. Smith afirmó que el tráfico de petróleo a Rhodesia del Sur aumentaba a pesar del embargo del Reino Unido y que se tenía el propósito de llevar a Rhodesia del Sur más petróleo del que este país consumía en realidad. Lo importante era que el tráfico de petróleo aumentaba, en vez de disminuir. Dijo que si cristalizaban los diversos planes que su régimen estaba preparando, Rhodesia del Sur superaría el embargo del Reino Unido.

261. El 16 de febrero de 1966 se informó desde Sudáfrica que Rhodesia del Sur podría conseguir 70.000 galones de combustible diariamente de Sudáfrica y Mozambique y que por el puesto fronterizo del camino de Beit-Bridge pasaban diariamente de Sudáfrica a Rhodesia del Sur más de 35.000 galones de gasolina, petróleo y queroseno. Se afirmaba que esa información era resultado de una investigación de tres días hecha en Beit-Bridge. El combustible era llevado a Beit-Bridge por camiones tanque sudafricanos, camiones de mudanzas y otros camiones pesados, y luego se transfería a camiones tanque de Rhodesia del Sur. Asimismo, parecía que Rhodesia del Sur estaba recibiendo de Mozambique una cantidad igual de petróleo.

262. El 17 de febrero de 1966, un portavoz del Gobierno del Reino Unido reconoció que estaba llegando gasolina a Rhodesia del Sur a través de Sudáfrica y que este hecho causaba preocupación. Sin embargo, se subrayó que eran muy exageradas las informaciones periodísticas, que hablaban de 70.000 galones diarios.

263. Según informaciones periodísticas posteriores, la entrada de petróleo de Sudáfrica en Rhodesia del Sur se calculaba entre 35.000 y 40.000 galones diarios durante el período comprendido entre mediados de febrero y la primera semana de marzo de 1966.

264. Una observadora situada en Rhodesia del Sur declaró el 1º de marzo de 1966 que había contado 44 vagones tanque en cinco días que habían llevado unos 308.000 galones de gasolina por el ferrocarril de Mozambique a Bulawayo. La observadora, quien dijo que sólo observaba durante el día, estimaba que cada vagón de gasolina que había visto tenía una capacidad de 7.000 galones aproximadamente.

265. El 3 de marzo de 1965, el "Ministerio de Comercio e Industrias" anunció que se iba a liberalizar el racionamiento de gasolina a fin de que los habitantes de Rhodesia del Sur pudieran salir de vacaciones. Según este anuncio, los que presentaran pruebas de reservas en firme, a fin de pasar fuera del país vacaciones de más de tres semanas, recibirían gasolina suficiente para llegar hasta la frontera.

Portugal y las sanciones económicas contra Rhodesia del Sur

266. Portugal efectúa solamente un comercio muy limitado con Rhodesia del Sur. Sin embargo, Rhodesia del Sur, que es un territorio sin litoral, depende completamente de Portugal para su conexión ferroviaria con los puertos marítimos de Mozambique, por los cuales realiza la mayor parte de su comercio exterior. Además, el oleoducto de Beira a Umtali, que proporciona a Rhodesia del Sur todo su petróleo crudo, pasa asimismo en su totalidad a través del territorio portugués de Mozambique.

267. El ferrocarril de Mozambique conecta con el de Rhodesia en Umtali y se extiende a través del territorio portugués hasta Beira, puerto marítimo de Mozambique, por el que pasa la mayor parte del comercio de ultramar de Zambia y Rhodesia del Sur. El ferrocarril de Rhodesia también se encuentra conectado con Lourenço Marques, puerto marítimo de Mozambique en el sur, por el que circula una cantidad limitada del comercio exterior de Rhodesia del Sur. Así, pues, la línea de Mozambique suministra la principal salida al mar de la Rhodesia Railways, que posee la línea de abastecimiento a través de Rhodesia del Sur y Zambia. La línea de Mozambique está controlada en su totalidad por los portugueses, que, por lo tanto, no necesitan compartir los ingresos ni la responsabilidad que aquélla implica. Dado que Mozambique se encuentra bajo administración portuguesa, tanto el ferrocarril como el puerto marítimo de Beira se hallan completamente dentro de la jurisdicción del Gobierno de Portugal.

268. El Dr. Alberto Franco Nogueira, Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, celebró una conferencia de prensa el 25 de noviembre de 1965 sobre la actitud del Gobierno portugués respecto de la cuestión de Rhodesia del Sur. Se informó que había manifestado que si se cortaban las comunicaciones ferroviarias de Rhodesia del Sur por Mozambique se perjudicaría a Zambia más que a Rhodesia del Sur. El transportar todo el cobre de Zambia a través de Angola hasta Lobito equivaldría a sacrificar las exportaciones de minerales de Katanga, con graves consecuencias para la economía de la República Democrática del Congo, puesto que la Benguela Railways no tenía capacidad para ambos. Portugal, agregó el Dr. Franco Nogueira, deseaba continuar su política de buena vecindad respecto de Malawi, Zambia y la República Democrática del Congo, aparte de Rhodesia del Sur. Se informó igualmente que el Dr. Franco Nogueira había dicho que resulta-

ba fácil para algunos preconizar medidas drásticas, violentas y teóricas. Pero Portugal debía actuar siempre con gran sentido de responsabilidad y espíritu de colaboración con muchos países, sin afectar el justo equilibrio de las necesidades colectivas.

269. El 5 de diciembre de 1965, se informó que, a la inversa, Portugal había aprobado un plan de emergencia para transportar la mayor parte del cobre de Zambia a través de Angola, si Rhodesia del Sur cortaba la vinculación ferroviaria de Zambia con el Océano Índico. En el viaje de regreso, los trenes tendrían amplia capacidad para transportar las importaciones de Zambia. En octubre de 1965, se comunicó privadamente la aprobación portuguesa del plan a funcionarios de la Benguela Railways, la cual se encuentra bajo el control de la Tanganyika Concessions Ltd., empresa británica con muchas inversiones en África.

Portugal y el embargo sobre el petróleo

270. Rhodesia del Sur recibe su petróleo crudo en Umtali, que se halla en la frontera de Rhodesia del Sur con Mozambique. Se bombea el petróleo crudo a lo largo del oleoducto de 184 millas de extensión, desde el puerto marítimo de Beira en Mozambique hasta Umtali. El oleoducto entre Beira y Umtali se puso en funcionamiento a fines de diciembre de 1964. La Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia es propietaria del oleoducto, cuyas operaciones tiene a su cargo. La propiedad del oleoducto corresponde a Lonrho Ltd., empresa británica (62,5%), e intereses portugueses (37,5%). Sin embargo, su directiva se compone de cinco miembros portugueses (uno de los cuales es designado por el Gobierno portugués) y cuatro miembros británicos.

271. La directiva de la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia se reunió en Lisboa, el 5 de diciembre de 1965, para estudiar la cuestión del embargo sobre el petróleo que el Gobierno del Reino Unido había impuesto a Rhodesia del Sur. En la reunión, los miembros portugueses (mediante el voto decisivo del Presidente) impidieron que se aprobara una propuesta de los miembros representantes de la Empresa Lonrho para que el oleoducto cesara sus operaciones hasta que el Gobierno del Reino Unido levantara el embargo sobre el petróleo. Pero, al mismo tiempo, los directores de la compañía rechazaron por unanimidad una solicitud, recibida del régimen de Smith, por conducto de la Central African Petroleum Refineries Company, de que una cantidad de 14.000 toneladas de petróleo aproximadamente que se encontraba en el oleoducto fuese bombeada hasta Keruka, a pesar de la falta de suministros para reemplazarla. El bombeo había sido suspendido el 31 de diciembre de 1965, cuando las existencias se habían agotado en Beira como resultado del embargo.

272. Al no contar con una garantía de indemnización por posibles daños, la compañía del oleoducto rechazó el pedido de Rhodesia del Sur, pues temía que las tuberías resultaran dañadas si se empleaba agua o aire comprimido.

273. Desde mediados de enero de 1966, se ha señalado repetidamente en informes periodísticos que productos refinados de petróleo llegan a Rhodesia del Sur por carretera y por ferrocarril desde Mozambique. En los citados informes se decía que tales productos venían de Lourenço Marques, en Mozambique, donde existe una refinería de petróleo y un directo enlace ferroviario

con Sudáfrica y Rhodesia del Sur. El 11 de febrero de 1966, el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, al formular comentarios sobre informaciones periodísticas de que se transportaba petróleo de Lourenço Marques a Rhodesia del Sur, declaró que nada sabía con respecto a que se estuviera enviando petróleo de Mozambique a Rhodesia del Sur. El 13 de febrero de 1966, se informó que 17 vagones tanque, que transportaban alrededor de 140.000 galones de gasolina, habían llegado a Rhodesia del Sur la semana anterior a través del puerto de Lourenço Marques, en Mozambique. Según se dijo, el petróleo había sido enviado desde Sudáfrica por ferrocarril. En un despacho periodístico procedente de Sudáfrica, de fecha 16 de febrero de 1966, se calculó que Rhodesia del Sur estaba recibiendo diariamente de Mozambique 35.000 galones de petróleo.

274. El 4 de marzo de 1966 se informó que el régimen de Smith estaba montando en Beira, como cuestión de alta prioridad, seis tanques petroleros prefabricados, cada uno de los cuales tenía capacidad para 3.000 toneladas de petróleo crudo. Los tanques se encuentran en la vecindad del oleoducto y están diseñados para conectar directamente con el oleoducto, sin pasar por los depósitos de las empresas petroleras británicas y norteamericanas que, antes del embargo, se encargaban de recibir el petróleo crudo destinado a la CAPREF. Se informó que se estaban armando los tanques pues se esperaba que llegarían petroleros privados dentro de poco tiempo con petróleo crudo para Rhodesia del Sur.

275. El 2 de marzo de 1966, el Gobierno del Reino Unido manifestó al Gobierno de Portugal que le causaban grave preocupación las informaciones acerca del suministro de productos derivados del petróleo a Rhodesia del Sur desde Mozambique. El Sr. Michael Stewart, Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, hizo las gestiones personalmente ante el Encargado de Negocios de Portugal en Londres. El Sr. Stewart también manifestó preocupación con respecto a otros informes referentes al montaje de los tanques de almacenamiento en Beira para Rhodesia del Sur.

276. El 9 de marzo de 1966 se informó desde Johannesburgo que se habían enviado en secreto miles de galones de gasolina a Rhodesia del Sur por medio de ferrocarriles sudafricanos, a través de Lourenço Marques, capital de Mozambique. Según este informe, en una operación secreta, en la que los trenes portugueses cambiaron de vías y emplearon medidas para distraer la atención, se había enviado a Rhodesia del Sur, para contrarrestar el embargo impuesto a los embarques de petróleo, un total calculado en 155.000 galones de gasolina. Se señalaba que el régimen de Smith había estado recibiendo de este modo la mayor parte del petróleo.

277. El 7 de marzo de 1966, el Encargado de Negocios de Portugal en Londres informó al Sr. Michael Stewart, Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que eran inexactos los informes según los cuales productos de petróleo estaban llegando a Rhodesia del Sur por ferrocarril, procedentes de Mozambique. Ulteriormente, se dijo que un portavoz del Gobierno del Reino Unido había declarado que Portugal también había informado al Gobierno del Reino Unido de que los nuevos tanques de almacenamiento de petróleo que se estaban montando en Beira eran para uso dentro

de Mozambique y no para petróleo destinado a Rhodesia del Sur.

Sudáfrica y las sanciones económicas y financieras contra Rhodesia del Sur

278. Sudáfrica es, después del Reino Unido y Zambia, el mercado comercial más importante de Rhodesia del Sur. En 1964, el valor de las importaciones que Rhodesia del Sur efectuó de Sudáfrica ascendió a 26.589.447 libras, esto es, el 24,35% del valor total de sus importaciones. El valor de las exportaciones de Rhodesia del Sur a Sudáfrica fue de 12.249.326 libras, esto es, el 8,47% del valor total de sus exportaciones, incluidas las reexportaciones. La balanza comercial arrojó un saldo de 14.340.121 libras desfavorable a Rhodesia del Sur.

279. El Primer Ministro de Sudáfrica, en la exposición que formuló el 11 de noviembre de 1965 sobre la declaración ilegal de independencia del Gobierno de Rhodesia del Sur (véanse los párrs. 124 y 125 *supra*), afirmó que su Gobierno seguiría manteniendo relaciones normales de amistad tanto con el Reino Unido como con Rhodesia del Sur. Dijo también que el Gobierno de Sudáfrica no podía participar en medidas tales como un boicoteo. Su política oficial había sido siempre, en todos los casos en que se la había hecho objeto de boicoteo, que los mismos son erróneos en principio y que ni siquiera se estudiaría la posibilidad de tomar represalias mediante la institución de un contra-boicoteo. En consecuencia, su Gobierno no podía tomar parte en ningún tipo de boicoteo. Al actuar de esta manera, Sudáfrica no sólo aplicaba su política propia, sino que también mostraba su adhesión a la posición fundamental de oposición a los boicoteos que frecuentemente había sido objeto de declaraciones explícitas por los más importantes Estados del mundo.

280. El 12 de noviembre de 1965, la República de Sudáfrica anunció que se suspendían todas las operaciones en moneda de Rhodesia del Sur hasta que se aclarase la situación entre el rand sudafricano y la libra de Rhodesia del Sur. El 18 de noviembre de 1965, el Reserve Bank of South Africa anunció que las transacciones financieras con Rhodesia del Sur volverían inmediatamente a la normalidad. En una declaración hecha conjuntamente por el Reserve Bank of South Africa y el Central Bank of Southern Rhodesia el 18 de noviembre de 1965 se manifestó que, a raíz de las negociaciones celebradas, las "transacciones financieras y comerciales permisibles" entre Sudáfrica y Rhodesia del Sur podían reanudarse sin tardanza sobre la misma base existente antes del 11 de noviembre de 1965.

281. Después de este anuncio, el Reserve Bank of South Africa indicó, el 18 de noviembre de 1965, que se reanudaban inmediatamente las transacciones financieras y comerciales con Rhodesia del Sur. La cotización de la libra de Rhodesia del Sur era igual a la que se registraba con anterioridad a la declaración ilegal de independencia. El 22 de diciembre de 1965 se informó que el Reserve Bank of South Africa había congelado los haberes en divisas de Rhodesia del Sur, como consecuencia de la presión ejercida por el Gobierno del Reino Unido. Tanto el Gobierno como el Re-

serve Bank of South Africa se habían negado a formular comentarios sobre dicha información.

282. Se dijo asimismo que el Sr. Donges, Ministro de Hacienda de la República de Sudáfrica, había dicho el 5 de diciembre de 1965 que, de ser necesario, y en el momento oportuno, se formularía una declaración sobre las relaciones financieras de Sudáfrica con Rhodesia del Sur. No ha habido desde ese entonces ninguna otra indicación relativa a la fecha en que puede esperarse la citada declaración.

283. Se informó que fuentes comerciales de Rhodesia del Sur calculaban que Sudáfrica sería el primer país que se beneficiaría de la cancelación de los aranceles preferenciales del *Commonwealth* aplicados a las importaciones procedentes del Reino Unido. En el anuncio hecho el 30 de noviembre de 1965 por el régimen ilegal de que se abolían las preferencias del *Commonwealth* sobre las importaciones del Reino Unido, se indicaba que tal medida permitiría que Rhodesia del Sur buscara acuerdos comerciales amistosos con países que hasta ese momento no habían podido participar en convenios especiales (véase el párr. 215 *supra*). En el pasado, los artículos sudafricanos no podían competir en el mercado de Rhodesia del Sur con los artículos manufacturados del Reino Unido, a causa de las tasas preferenciales de importación de que disfrutaban estos últimos.

284. El 4 de diciembre de 1965 se informó desde Johannesburgo que los exportadores sudafricanos esperaban un aumento muy grande de las exportaciones de Sudáfrica a Rhodesia del Sur como resultado de estos acontecimientos. Se informó asimismo que se calculaba que el incremento del comercio entre los dos países oscilaría entre el 20% y el 30%, dependiendo ello de la medida en que se liberalizaran las restricciones impuestas por Rhodesia del Sur para controlar las importaciones. Se esperaba que el incremento mayor se registraría en los artículos indispensables para la economía de Rhodesia del Sur, tales como maquinaria, especialmente maquinaria para minería, material rodante ferroviario y equipo telefónico. Se informó que el "Comisionado Comercial" de Rhodesia del Sur en Sudáfrica habría declarado, el 22 de noviembre de 1965, que el comercio entre ambos países ya había vuelto al nivel existente antes de la declaración ilegal de independencia.

285. El 25 de diciembre de 1965 se informó desde Salisbury que se iba a abrir un centro de comercialización de Rhodesia del Sur en Johannesburgo el 1º de febrero de 1966, por un período experimental de tres meses. Se informó igualmente que el centro tenía por objeto promover las ventas de las industrias ligeras de Rhodesia del Sur y permitirles aprovechar plenamente la cuota concedida en virtud del acuerdo comercial de 1965 entre Rhodesia del Sur y Sudáfrica.

286. Se informó, el 8 de enero de 1966, que Sudáfrica había decidido dejar de distinguir en sus cifras comerciales entre las exportaciones y las reexportaciones. Se señaló que a consecuencia de ello se había tornado mucho más difícil para los extranjeros averiguar si Sudáfrica estaba sirviendo de conducto para las exportaciones de Rhodesia del Sur sometidas a embargo o proporcionándole petróleo también objeto del em-

bargo. También se informó el 30 de enero de 1966 de que, como resultado de ello, los hombres de negocios sudafricanos gozaban de mayor libertad para enviar cuanto pudieran a Rhodesia del Sur.

287. El 21 de enero de 1966, el Sr. Charles Swart, Presidente de la República de Sudáfrica, declaró en el discurso que formuló en la apertura del Parlamento que Sudáfrica continuaría su política de tratar de mantener relaciones amistosas con el Reino Unido y Rhodesia del Sur, pero que no participaría en boicoteos o sanciones contra país alguno.

288. El 17 de febrero de 1966, el Brigadier Andrew Dunlop, "Ministro de Transportes y Energía" de Rhodesia del Sur, declaró en la "Asamblea Legislativa" que desde hacía muchos meses había planes para establecer vínculos ferroviarios entre Rhodesia del Sur y Sudáfrica, los cuales podían ejecutarse inmediatamente para enfrentar cualquier emergencia que surgiera, si se le negaba a Rhodesia del Sur el uso del ferrocarril a través de Bechuania.

289. En la actualidad, la única conexión ferroviaria con Sudáfrica se hace a través de Bechuania, y existen dos posibilidades de conectar los sistemas ferroviarios de Rhodesia del Sur y Sudáfrica. Una consistiría en un enlace de 100 millas desde Rutenga, en la línea a Lourenço Marques, hasta Beit-Bridge. La otra, que tendría longitud y un costo parecidos, iría desde la actual terminal de la Rhodesia Railway en West Nicholson, hasta Beit-Bridge.

Sudáfrica y el embargo del petróleo

290. Poco después de que el Reino Unido proclamara el embargo del petróleo, ciertos medios sudafricanos aparentemente privados emprendieron varias campañas de "gasolina para Rhodesia" para enviar dicho producto en grandes cantidades como donativo a Rhodesia del Sur. Se informa asimismo que varios particulares y grupos comerciales privados iniciaron un servicio continuo de transporte de petróleo refinado y productos del petróleo a Rhodesia del Sur.

291. El 17 de enero de 1966, el Sr. Smith declaró públicamente que seguían llegando a Rhodesia del Sur petróleo y productos del petróleo, a pesar del embargo (véase el párr. 257 *supra*), y posteriormente, el 27 de enero de 1966, agregó en un mensaje radiado de agradecimiento al pueblo de Sudáfrica, que los donativos de combustibles a Rhodesia del Sur constituían un gesto típico de la tradicional cordialidad que caracterizaba a los sudafricanos en todo el mundo. El Sr. Smith dijo en ese mensaje que los donativos de petróleo habrían de fortalecer a su régimen para la lucha que le esperaba.

292. El 25 de enero de 1966, el Primer Ministro de la República de Sudáfrica, Sr. Hendrik Verwoerd, declaró en el Parlamento que su Gobierno no impediría que los sudafricanos enviaran donativos de petróleo o gasolina a Rhodesia del Sur, y señaló que prohibir el envío de donativos de cualquier clase sería una forma de participar en las medidas de boicoteo contra Rhodesia del Sur. Su Gobierno, al tiempo que se negaba a intervenir en la controversia acerca de Rhodesia del Sur, mantenía su posición en el sentido de no unirse a ninguna forma de boicoteo contra Rhodesia del Sur,

en particular al embargo del petróleo. Se anunció asimismo que el Sr. Verwoerd había dicho que si las compañías o los distribuidores de gasolina deseaban abastecer de combustible a Rhodesia del Sur, el Gobierno no les impediría hacerlo.

293. El 25 de enero de 1966, el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica anunció que había establecido un comité interdepartamental encargado de estudiar el envío de gasolina y productos del petróleo a Rhodesia del Sur. Dicho Comité fue establecido después de que un grupo de partidarios de Rhodesia del Sur había formado en Johannesburgo una organización para recaudar fondos entre los particulares a fin de adquirir gasolina para Rhodesia del Sur. Se informó que, en respuesta a la pregunta de si había algo que pudiera impedir que los ciudadanos de Sudáfrica enviaran en forma privada donativos de gasolina a sus amigos de Rhodesia del Sur, un funcionario del Departamento de Comercio e Industria dijo que, en la actualidad, la gasolina y los productos del petróleo no estaban sometidos al control de exportaciones. Se informó asimismo que dicho funcionario había dicho que si la gente enviaba gasolina a Rhodesia del Sur sin ponerse en primer término en contacto con el Ministerio, este último no se enteraría de ello, pero puesto que se estaba estudiando la cuestión el consejo que daba el Ministerio era que no se hiciera nada hasta tanto el Comité formulara una declaración.

294. Según se informó, después de la declaración que formuló el Primer Ministro Verwoerd el 25 de enero de 1966, los envíos de petróleo y productos de petróleo de Sudáfrica a Rhodesia del Sur aumentaron considerablemente, alcanzando su máximo a mediados de febrero.

295. El 27 de enero de 1966, se reunieron en la Ciudad de El Cabo representantes de las empresas petroleras de Sudáfrica a fin de considerar la declaración del Primer Ministro de que el Gobierno no se inmiscuiría si las compañías privadas o los particulares enviaran abastecimientos a Rhodesia del Sur. Las empresas decidieron ponerse en comunicación con el Gobierno para averiguar las consecuencias de la declaración que había formulado el Primer Ministro ante el Parlamento, a fin de aclarar la situación. Ninguno de los funcionarios ejecutivos que asistieron a la reunión accedió a hacer comentarios sobre el resultado de la misma.

296. Posteriormente, las empresas petroleras de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia que operan en Sudáfrica anunciaron que sus casas centrales habían dado instrucciones de no vender combustibles a personas u organizaciones que desearan adquirirlo para transportarlo posteriormente a Rhodesia del Sur. El 12 de febrero de 1966, se informó que el Gobierno de Sudáfrica había avisado a las empresas petroleras de la República que no se permitiría la venta condicional de petróleo. Se informó que dicho aviso se había hecho después que las empresas petroleras extranjeras habían dispuesto que sus depósitos cercanos a la frontera con Rhodesia del Sur no vendieran petróleo a los compradores de dicho país. Se señaló que la *Financial Gazette* de Sudáfrica había dicho que el Gobierno consideraba que las instrucciones de las casas centrales a las compañías petroleras extranjeras establecidas en la Re-

pública constituían una injerencia directa en los asuntos de Sudáfrica.

297. El 13 de febrero de 1966, la South African Oil Company que es una empresa de propiedad nacional, anunció que estaba vendiendo combustible sin restricciones, pero negó que dicha circunstancia se debiera a presiones del Gobierno de la República.

298. Según unos cálculos publicados en Pretoria el 16 de febrero de 1965, los envíos de petróleo que cruzaban la frontera sudafricana con dirección a Beit-Bridge en Rhodesia del Sur representaban casi la mitad de las necesidades diarias de Rhodesia del Sur en materia de gasolina y productos del petróleo, con arreglo al plan de racionamiento impuesto como resultado del embargo del Reino Unido. Se calculaba que por lo menos 35.000 galones de productos petroleros cruzaban diariamente la frontera en viajes cortos continuos.

299. Según los informes de prensa, dichos envíos sobrepasaban evidentemente los medios de que disponían las organizaciones voluntarias de Sudáfrica que habían iniciado originalmente la campaña de "gasolina para Rhodesia". Se describía a esas remesas de petróleo como envíos comerciales en gran escala, organizados a través de una organización con base en Rhodesia del Sur, la GENTA, que estaba enviando camiones tanque para cargar petróleo en el Transvaal, aparentemente como donativos.

300. El 16 de febrero de 1966, el Embajador del Reino Unido se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica a fin de expresarle su preocupación por las crecientes remesas de petróleo a Rhodesia del Sur. Se informa que el Ministro de Relaciones Exteriores contestó que su Gobierno se atenía a la política que había anunciado de no apoyar los boicoteos, pero que examinaría la reclamación del Reino Unido.

301. El 19 de febrero de 1966, el Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Wilson, celebró conversaciones con el Embajador de Sudáfrica en Londres, Dr. Carel de Wet, acerca del quebrantamiento del embargo petrolero contra el régimen de Smith. Según se informa, el Sr. Wilson formuló una enérgica protesta al Embajador de Sudáfrica.

302. El 22 de febrero de 1966, el Secretario de Estado para las Relaciones con el *Commonwealth*, Sr. Arthur Bottomley, dijo ante el Parlamento que estaba llegando a Rhodesia del Sur petróleo refinado procedente de Sudáfrica en una cantidad tal que era motivo de preocupación para el Gobierno del Reino Unido. Señaló asimismo que se estaban haciendo representaciones acerca de esta cuestión ante el Gobierno de Sudáfrica.

303. En posteriores informes de prensa se calculaba que los envíos de petróleo de Sudáfrica a Rhodesia del Sur habían sido de 35.000 a 40.000 galones por día durante el período de mediados de febrero a la primera semana de marzo de 1966.

304. El 28 de febrero de 1966, el Primer Ministro Verwoerd reafirmó en un discurso que pronunció durante la campaña electoral que su Gobierno no creía en las sanciones. Si su Gobierno pusiera fin al envío a Rhodesia del Sur de cualquier producto de Sudáfrica, incluso el petróleo o la gasolina, ello equivaldría a

participar en un boicoteo. En una parte de su discurso, que se consideró como referencia directa al mayor volumen actual de ventas a Rhodesia del Sur de petróleo y productos del petróleo, señaló que la política de Sudáfrica de continuar "el comercio normal" con Rhodesia del Sur no significaba que había que seguir vendiendo los mismos productos o las mismas cantidades que antes. Dijo que el "comercio normal" significaba que todos los competidores trataban de vender aquello que pudieran y todo lo que pudieran, es decir, el comercio sin inhibiciones ni interrupciones. Ocurría a menudo que, en el curso del comercio normal, cierta persona lograba ventajas sobre otra y, en el curso del mismo, vendía más de lo habitual. Ello no significaba que el comercio fuera anormal.

Zambia y Malawi y las sanciones económicas y financieras contra Rhodesia del Sur

305. En 1964, Zambia y Malawi absorbieron en conjunto el 25% de las exportaciones de Rhodesia del Sur, incluyendo las reexportaciones, mientras que las exportaciones totales de esos dos países a Rhodesia del Sur representaron tan sólo un 5,5% de las importaciones de Rhodesia del Sur. Zambia absorbió por sí sola el 28,28% de las exportaciones de Rhodesia del Sur, incluyendo las reexportaciones, mientras que sus exportaciones a Rhodesia del Sur sólo representaron el 4,92% de las importaciones de este país. Malawi, por otra parte, absorbió el 6,31% del valor total de las exportaciones de Rhodesia del Sur, incluyendo las reexportaciones, mientras que correspondió a ese país solamente el 1,45% de las importaciones de Rhodesia del Sur. Las ventas de Rhodesia del Sur a Zambia y Malawi estaban constituidas principalmente por artículos manufacturados.

306. En 1964, el valor total de las mercaderías exportadas, incluyendo las reexportadas, de Rhodesia del Sur a Zambia se elevó a 40.732.687 libras, mientras que el valor de las importaciones ascendió a 5.396.453 libras; en ese año, el 39,41% de la totalidad de las importaciones de Zambia procedieron de la vecina Rhodesia del Sur; las importaciones totales de Zambia ascendieron en 1964 a 78.219.201 libras, de las cuales 30.868.610 libras en mercaderías para el consumo interno correspondían a Rhodesia del Sur. En particular, la energía eléctrica y el carbón son elementos de importancia vital para la economía de Zambia, por cuanto la vecina Rhodesia del Sur es el principal abastecedor de energía eléctrica y el único país que suministra carbón a Zambia en condiciones económicas.

307. Las cifras del comercio con Malawi muestran que Rhodesia del Sur tuvo, en 1964, una balanza comercial favorable de 5.598.637 libras. Ese año el valor total de las exportaciones, incluso las reexportaciones, ascendió a 7.229.550 libras, mientras que el valor total de las importaciones fue solamente de 1.630.913 libras; el 39,1% del total de las importaciones de Malawi en 1964 procedió de Rhodesia del Sur.

308. Tanto Zambia como Malawi impusieron restricciones al comercio con Rhodesia del Sur cuando ésta declaró ilegalmente la independencia. Zambia eliminó a Rhodesia del Sur de la lista preferencial del *Commonwealth* el 14 de noviembre de 1965, y Malawi anunció asimismo, el 17 del mismo mes, que conside-

raba revocado a partir del día siguiente su acuerdo de comercio preferencial con Rhodesia del Sur. Debido a las dificultades con que tropezaron para hallar otros abastecedores y a razones de geopolítica del África central y meridional, ambos países continuaron mientras tanto el comercio de mercaderías esenciales con Rhodesia del Sur, pero pidieron a los importadores locales que buscaran otras fuentes de abastecimiento.

309. El 8 de diciembre de 1965, el régimen de Smith impuso restricciones al comercio con Zambia y Malawi. En virtud de las nuevas restricciones se prohibía a los exportadores de Rhodesia del Sur aceptar libras esterlinas como pago de las mercaderías vendidas a Zambia y Malawi. Con arreglo a las nuevas restricciones, las mercaderías enviadas a Malawi y Zambia deben pagarse ahora, por adelantado, en dólares de los Estados Unidos, en dólares canadienses o en monedas de los países de Europa occidental.

310. En un libro blanco que publicó el 26 de abril de 1965, el anterior Gobierno de Rhodesia del Sur declaró que si la economía de Rhodesia del Sur había de verse afectada como resultado de las sanciones del Gobierno del Reino Unido, Rhodesia del Sur estudiaría la posibilidad de repatriar a los trabajadores extranjeros y sus familias a Zambia y Malawi, a fin de proteger a la mano de obra local. Dicho Gobierno calculaba que había 500.000 personas en esas condiciones en Rhodesia del Sur (véase A/6000/Rev.1, cap. III, apéndice VI).

311. Haciendo referencia evidentemente a Zambia y Malawi, el Sr. Smith declaró en su discurso radiado del 8 de diciembre de 1965, que los trabajadores que quedaran inactivos como resultado de las presiones económicas ejercidas por el Reino Unido serían colocados en los empleos que ocupaban actualmente los trabajadores extranjeros y estos últimos serían reemplazados y repatriados a sus países de origen.

Otros acontecimientos ocurridos entre Zambia y Rhodesia del Sur

312. Antes que el Reino Unido proclamara el embargo petrolero contra Rhodesia del Sur, la Central African Petroleum Refineries Company de Rhodesia del Sur era el abastecedor normal de petróleo y productos del petróleo a Zambia. El 18 de diciembre de 1965, Rhodesia del Sur prohibió todos los envíos de petróleo y productos del petróleo a Zambia. El "Ministro de Comercio e Industria" de Rhodesia del Sur, Sr. George W. Rudland, dijo que el embargo declarado como represalia contra Zambia era de carácter temporal y señaló que sería levantado cuando Rhodesia del Sur hubiera superado los efectos del embargo impuesto por el Reino Unido. Después de proclamado el embargo contra Rhodesia del Sur, los Gobiernos del Reino Unido, el Canadá y los Estados Unidos comenzaron, en forma conjunta, el transporte regular por vía aérea de petróleo y productos del petróleo a Zambia para eludir dicho embargo.

313. El 19 de diciembre de 1965, Rhodesia del Sur impuso nueva regalía de 5 libras por tonelada de carbón y un derecho de exportación de 8 libras por tonelada de coque exportados a Zambia y la República Democrática del Congo.

314. El 1º de enero de 1966, el Sr. Smith formuló propuestas para reanudar el abastecimiento de gasolina a Zambia y reducir la regalía sobre el carbón y el derecho de exportación sobre el coque. El 2 de enero de 1966, dicha oferta fue rechazada por el Presidente Kaunda de Zambia, quien la describió como un gesto vano.

315. El 3 de enero de 1966, el "Ministro de Tierras y Minas" de Rhodesia del Sur anunció que la regalía adicional sobre el carbón y el derecho de exportación sobre el coque exportado a Zambia y a la República Democrática del Congo habían quedado sin efecto a partir de la medianoche del 1º de enero de 1966.

316. La industria del cobre de Zambia, que representa más del 90% de las exportaciones de ese país, depende estrechamente del carbón procedente de Wankie (Rhodesia del Sur), que se envía por los Rhodesia Railways. En 1964, Zambia importó 1.073.923 toneladas de carbón de Rhodesia del Sur, por un total de 1.204.449 libras, lo que representaba un 95% aproximadamente del consumo total de carbón de ese país. El otro 5%, es decir 3.961 toneladas, se importó de Sudáfrica, por un valor de 11.013 libras. Además de ello, se importaron de Rhodesia del Sur 72.476 toneladas de coque y semicoque de carbón y briquetas, por un valor de 290.019 libras⁸.

Zambia y Malawi y sus servicios comunes con Rhodesia del Sur

317. Zambia comparte con Rhodesia del Sur tres servicios comunes: la Central African Power Corporation (presa de Kariba), la Rhodesia Railways y la Central Africa Airways. Malawi es el tercer socio en la Central Africa Airways. Estos servicios comunes, que se mantuvieron después de disuelta la Federación de África Central en 1963, son administrados por altas autoridades de los gobiernos miembros. La presa del Kariba y la Rhodesia Railways están cada una bajo la dirección de su respectiva Alta Autoridad de Zambia y Rhodesia del Sur, integradas por dos miembros de cada país, cuyas decisiones han de ser tomadas por unanimidad. La Alta Autoridad de la Central Africa Airways se diferencia de las otras en que tiene un miembro que representa a Malawi.

318. Cuando la Federación de Rhodesia y Nyasalandia quedó disuelta el 31 de diciembre de 1963, los Gobiernos de Rhodesia del Norte (ahora Zambia) y Rhodesia del Sur convinieron en ejercer conjuntamente la propiedad, dirección y responsabilidad del futuro desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Kariba. Para la determinación de la política que se ha de seguir, se creó una Alta Autoridad para la Producción de Energía, compuesta por dos ministros de cada uno de los dos países (cuyas decisiones deben ser unánimes) y se creó una empresa pública, la Central African Power Corporation, para la explotación y desarrollo de los recursos de energía eléctrica. a la que se hizo responsable del activo y pasivo de la Junta Federal de Energía.

319. La central hidroeléctrica de Kariba produce en la actualidad la mayor parte de la electricidad ge-

⁸ Zambia, *Monthly Report of Statistics*, octubre de 1965.

nerada en Zambia y Rhodesia del Sur, ya que la producción de las centrales térmicas se ha reducido apreciablemente. En 1963, la cuenca cuprífera satisfacía más de la mitad de sus necesidades con la producción de Kariba, completando la cantidad necesaria por medio de generadores térmicos locales explotados por compañías mineras y de la central hidroeléctrica Le Marinel de Katanga mediante un acuerdo que expira en el segundo semestre de 1966. La única línea de transporte de energía con que cuenta la red de distribución — de Kariba a Kitwe en la cuenca cuprífera — está trabajando ya a plena capacidad y se calcula que a últimos de 1966 las necesidades de energía eléctrica de esa zona excederán de la capacidad de esta única línea.

320. Aunque la presa de Kariba se encuentra en la frontera entre los dos países, la central eléctrica está instalada en el lado de Rhodesia del Sur.

321. La Rhodesia Railways tiene un total de 3.000 millas de línea desde la región de Ndola en la cuenca cuprífera de Zambia hasta Umtali en la frontera de Rhodesia del Sur con Mozambique, y penetra en Bechuania pasando por Bulawayo. Enlaza con los puertos marítimos de Beira y Lourenço Marques (Mozambique) a través de Rhodesia del Sur, y con los puertos sudafricanos a través de Bechuania. La mayor parte del tráfico ferroviario de mercancías va al puerto marítimo de Beira en Mozambique para su transporte marítimo.

322. Los enlaces ferroviarios de la Rhodesia Railways en Rhodesia del Sur con los puertos marítimos de Mozambique y Sudáfrica obligan a Zambia, país sin litoral, a depender, para su comunicación con puertos de mar, de las instalaciones ferroviarias de tránsito a través de Rhodesia del Sur. Las 750.000 toneladas de cobre que Zambia exporta anualmente son transportadas a Beira por la Rhodesia Railways. Zambia también depende del enlace ferroviario por Rhodesia para sus importaciones esenciales de alimentos, maquinaria, carbón, productos del petróleo, automóviles y camiones y medicamentos.

323. Los dos servicios de propiedad común de Zambia y Rhodesia — la presa de Kariba y la Rhodesia Railways — son esenciales para la economía de Zambia. La presa de Kariba suministra más del 66% de la energía eléctrica requerida para la explotación de las minas de cobre, que representan más del 90% de las exportaciones de Zambia. Por su parte, la Rhodesia Railways transporta el 99% de todas las importaciones que entran en Zambia, incluyendo el petróleo. También transporta de Rhodesia del Sur a Zambia todo el carbón que necesitan las minas de cobre. Si Rhodesia del Sur no permitiera el empleo de la energía eléctrica de Kariba ni de las instalaciones ferroviarias de tránsito por su territorio, ello afectaría en sumo grado a la industria del cobre de Zambia y también cerraría la ruta ferroviaria a las importaciones de Zambia, en particular el carbón de Wankie (Rhodesia del Sur) con destino a las minas de cobre.

324. El 17 de noviembre de 1965, el Presidente Kaunda de Zambia dijo en una conferencia de prensa que había solicitado del Reino Unido el envío de tropas para ayudar a los soldados de Zambia a defender la presa de Kariba. En caso de que el Reino Unido

no enviara tropas después que Rhodesia del Sur hubiera cortado el suministro de energía de Kariba a Zambia, él se reservaría el derecho a invitar a cualquier Potencia a que viniera a colaborar en la protección de la presa. Indicó que preferiría que se enviaran tropas a Kariba antes que ocurriera algo. El Presidente Kaunda repitió su solicitud de tropas al Reino Unido el 27 de noviembre de 1965, tras una breve interrupción en el suministro de energía eléctrica entre Kariba y Kitwe, provocada por sabotadores en Zambia.

325. El 1º de diciembre el Primer Ministro Harold Wilson anunció ante el Parlamento que el Reino Unido estaba dispuesto a enviar un contingente militar a Zambia. Declaró que el Reino Unido estaba dispuesto a enviar una escuadrilla de cazas reactores Javelin a Zambia que llevaría efectivos de apoyo procedentes de un regimiento de las fuerzas aéreas. Los reactores estaban preparados para dirigirse a la ciudad de Ndola en Zambia y las fuerzas de tierra se dirigirían a Ndola, Lusaka y probablemente a Livingstone. También declaró ante el Parlamento el 1º de diciembre de 1965 que había dado al Presidente Kaunda de Zambia seguridad de que el Gobierno del Reino Unido no permanecería inactivo en el caso de que el Sr. Smith empleara su control ilegítimo de la presa de Kariba para cortar el suministro de energía eléctrica a la cuenca cuprífera de Zambia.

326. El 2 de diciembre de 1965, el Sr. Harold Wilson reveló haber recibido comunicación del Presidente de Zambia aceptando el envío a ese país de aviones de la Real Fuerza Aérea. Dijo que había conversaciones en curso sobre el estacionamiento de fuerzas de tierra del Reino Unido en Zambia. Se informó que la escuadrilla de cazas reactores Javelin y efectivos del regimiento de la Fuerza Aérea habían llegado a Zambia el día 3 de diciembre de 1965.

327. El 5 de diciembre de 1965 se informó que el Secretario de Estado para las Relaciones con el *Commonwealth*, Sr. Arthur Bottomley, había declarado que el Reino Unido tenía motivos para creer que en la presa de Kariba se habían colocado explosivos. Sin embargo, se informó que el Sr. Smith había declarado que su régimen no tenía planes serios de volar la presa. Dijo que esto sólo estaba previsto en el plan de emergencia. La afirmación del Sr. Arthur Bottomley de que la presa de Kariba había sido minada fue desmentida el 6 de diciembre de 1965 por el Gobierno de Zambia y por la Central African Power Corporation.

328. El 9 de diciembre de 1965, se informó que el Presidente Kaunda había declarado ante el Parlamento de Zambia que si Rhodesia del Sur obstaculizara alguno de los servicios comunes, ello constituiría una declaración de guerra, en cuyo caso él no vacilaría en ordenar a su país que entrara en acción. También se dio cuenta de que el Presidente Kaunda había dicho que el Gobierno del Reino Unido estaba aprovechando el hecho de que Zambia dependía de los suministros de electricidad, carbón y petróleo de Rhodesia del Sur como excusa para no intensificar sus sanciones contra Rhodesia del Sur. También había declarado que Zambia no debía ser empleada como pretexto para la pasividad del Reino Unido. El mismo día informó también que el Presidente Kaunda había enviado un nuevo y urgente llamamiento al Primer Ministro del Reino

Unido en solicitud de tropas británicas para proteger la presa de Kariba.

329. Del 19 al 24 de enero una misión militar del Reino Unido dirigida por el General de brigada Willoughby, comandante de las fuerzas de tierra del Reino Unido en el Oriente Medio en Adén, visitó Zambia con objeto de estudiar con el Gobierno de este país las disposiciones que se debían adoptar con respecto al envío de fuerzas del Reino Unido a Zambia. Durante la visita esta misión inspeccionó la orilla de la presa de Kariba en territorio de Zambia.

330. El "Ministro Adjunto de Información" del régimen ilegal, Sr. Van der Byl, dijo el 26 de enero de 1966 en Salisbury, que Rhodesia del Sur no vacilaría en poner en práctica el sistema de "tierra quemada" en caso de que el Reino Unido enviara tropas a Rhodesia del Sur. Declaró que en cuanto el Primer Ministro del Reino Unido estuviera enterado de esto, renunciaría a enviar tropas del Reino Unido ni de ninguna otra procedencia a Rhodesia del Sur.

Sequía en Rhodesia del Sur

331. El 5 de enero de 1966 se dio cuenta de que Rhodesia del Sur se veía amenazada de una grave crisis agrícola a consecuencia de una sequía en la casi totalidad de la provincia sudoccidental de Matabeleland y en parte de la región central. Los informes decían que el ganado estaba muriendo a razón de 250 cabezas por día, que gran parte de la cosecha de maíz se había perdido, que los pantanos y ríos estaban secos y que incluso los árboles estaban secándose. Mediante un plan de urgencia anunciado por el régimen de Rhodesia del Sur, se estaba transportando el ganado a zonas septentrionales donde las condiciones eran mejores.

332. El 8 de enero de 1966, se anunció que el Gobierno del Reino Unido, en colaboración con los Gobiernos de Australia y Canadá, había iniciado el día anterior una operación de socorro mediante el envío de suministros de cereales a los países del África central afectados por la sequía, incluyendo Rhodesia del Sur.

333. Los informes decían que en el caso de Rhodesia del Sur, el Gobierno del Reino Unido actuaría por conducto de Sir Humphrey Gibbs, Gobernador legítimo de Rhodesia del Sur, quien trataría con el régimen de Smith de la organización del suministro urgente de cereales a las zonas afectadas. El Gobierno del Reino Unido puso de relieve que las disposiciones relativas al transporte de cereales no constituían una mitigación del embargo del petróleo ni de las sanciones comerciales y financieras. El Gobierno del Reino Unido declaró también que ésta era una acción humanitaria y que no iba a servirse del hambre como sanción. Difícilmente podría ayudar a otros países circundantes dejando al mismo tiempo morir a miles de personas en Rhodesia del Sur.

334. El 13 de enero de 1966, se dio cuenta de que el plan de socorro emprendido por el Reino Unido estaba progresando lentamente, debido a que no se habían recibido cifras relativas a las cantidades y clases de cereales requeridas. Para el caso de Rhodesia del Sur, se informó que no se había llevado a la práctica

el plan primitivo mediante el cual el Gobernador de Rhodesia del Sur había de tratar con el régimen de Smith para obtener información sobre los artículos que se necesitaban y para organizar suministros de urgencia a las zonas afectadas. Se informó que el Gobierno del Reino Unido aparentemente había pedido entonces al Gobernador que hiciera sus propios cálculos sobre lo que se requería a base de la información de que disponen. Los informes subrayaban que hasta el momento no había habido trato alguno con el régimen ilegal.

335. El 20 de enero de 1966 se dio cuenta de que el Gobernador había presentado al Primer Ministro del Reino Unido un informe sobre la sequía. Al parecer el Gobernador comunicó en su informe que si bien la sequía había sido grave, la población no padecía hambre. Unos auxilios suplementarios del carácter sugerido por el Primer Ministro del Reino Unido serían bien acogidos, pero no se precisaría que fueran en la escala que el Gobernador había sugerido en un principio. El Gobernador agregaba que lo más urgente era el suministro de agua y el envío de pienso para el ganado y algunos alimentos de socorro para ciertas localidades.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

336. El Comité Especial examinó la cuestión de Rhodesia del Sur en sus sesiones 401a. a 407a., celebradas entre el 6 y el 21 de abril de 1966^a.

337. Los Representantes Permanentes de Ghana y Argelia, por medio de cartas de fechas 12 de abril de 1966 (A/AC.109/155), y 13 de abril de 1966 (A/AC.109/156), respectivamente, solicitaron participar en las deliberaciones del Comité Especial sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. En su 403a. sesión, celebrada el 14 de abril de 1966, el Comité decidió, sin objeciones, acceder a estas solicitudes.

338. Por carta de fecha 19 de abril de 1966 (A/AC.109/157), el Representante Permanente de Arabia Saudita pidió también participar en las deliberaciones del Comité Especial sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. En su 405a. sesión, celebrada el 19 de abril de 1966, el Comité decidió, sin objeciones, acceder a esta solicitud.

Peticiones escritas

339. El Comité Especial tuvo ante sí las siguientes peticiones escritas relativas a Rhodesia del Sur:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento</i>
Sr. Emilio Sereni, Presidente, Alleanza Nazionale dei Contadini Italiani	A/AC.109/PET.435
Sr. Reinhard Fiedler y otros veintidós estudiantes secundarios de Burgstädt, República Democrática Alemana	A/AC.109/PET.436
Sr. Nnamdi B. Emetarom, Presidente de la African Students' Association in Israel	A/AC.109/PET.437

^a En las secciones F y G del presente capítulo figura una reseña del nuevo examen de la cuestión de Rhodesia del Sur por el Comité Especial durante sus reuniones celebradas en África.

Dr. Milnor Alexander, Secretario Legislativo de la Sección de los Estados Unidos en la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad	A/AC.109/PET.438
Sr. George W. Brind	A/AC.109/PET.439 y Add.1
Sr. Khaled Aljoundi, Presidente de la Confederation of Syrian Workers Trade Unions	A/AC.109/PET.440
FIFITAMA (Consejo de la Juventud de Madagascar)	A/AC.109/PET.441
Sra. A. M. Hughes, Secretaria de Estado de la Union of Australian Women	A/AC.109/PET.453

Declaraciones generales

340. El Presidente dijo que, dados los alarmantes acontecimientos ocurridos recientemente en Rhodesia del Sur, varias delegaciones le habían encarecido que hiciese una declaración desde la Presidencia.

341. Un gran número de miembros del Comité Especial había expresado una preocupación cada vez mayor ante el rápido agravamiento de la situación en Rhodesia del Sur. Los acontecimientos de los últimos días no habían aliviado por cierto esa preocupación. Todos los miembros tenían sin duda pleno conocimiento del incidente del petrolero griego *Joanna V*, que llevaba petróleo al parecer con destino a Rhodesia del Sur, y que había anclado cerca del puerto de Beira, en el Mozambique portugués. Según las noticias procedentes de Londres, ello había ocurrido haciendo caso omiso de las instrucciones dadas por una fragata británica de no seguir hasta Beira y, según los británicos, al dar dichas instrucciones habían procurado imponer el embargo del petróleo decretado por el Reino Unido contra Rhodesia del Sur, en conformidad con la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, de 20 de noviembre de 1965.

342. Según la opinión general, este incidente estaba lejos de ser un hecho aislado como violación o tentativa de violación del embargo del Reino Unido contra Rhodesia del Sur. Había llegado un gran número de convincentes informaciones sobre actividades de los portugueses y sudafricanos para llevar petróleo a Rhodesia. Lo que provocaba grave preocupación en la mayoría de los miembros del Comité era que dichos incidentes demostraban sin lugar a duda el lamentable fracaso del Gobierno del Reino Unido en su propósito de derrocar el régimen ilegal de Ian Smith en Rhodesia del Sur mediante la imposición de sanciones.

343. El Comité tenía derecho a esperar que el Reino Unido restableciese en Rhodesia del Sur la legalidad constitucional, en vista del gran número de declaraciones que había hecho sobre la cuestión en las Naciones Unidas y en otras partes, desde comienzos de diciembre de 1965 y en enero de 1966, en el sentido de que las medidas que habían estado imponiendo mediante sanciones provocarían la caída de ese régimen ilegal "en cuestión de semanas más que de meses". En tales circunstancias, era procedente y adecuado atribuir directamente al Gobierno del Reino Unido la responsabilidad del rápido y constante empeoramiento de la situación en Rhodesia del Sur. El Gobierno del Reino Unido había hecho a menudo piadosas declaraciones acerca de sus responsabilidades para con todos los sectores de

la comunidad en sus territorios. Pese a ello, en esta prueba de importancia trascendental en que 200.000 blancos, siguiendo las peores tradiciones del racismo, habían impuesto con arrogancia y desafío su dominio sobre los 4 millones de habitantes autóctonos negros de Rhodesia del Sur, con flagrante menosprecio de la democracia y de las tan alardeadas ideas británicas de justicia y libre determinación, los británicos habían fracasado lamentablemente en el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades para con los habitantes negros de Rhodesia del Sur; además, tampoco habían dado cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas.

344. En consecuencia, el Comité tenía el deber de reconocer que esa situación explosiva constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, ante la presencia de la irritante cuestión de Rhodesia del Sur en su programa y la existencia del régimen ilegal minoritario racista de Rhodesia del Sur. El Comité encarecía a todos los Estados que no reconociesen el régimen ilegal de Rhodesia del Sur y no mantuviesen relaciones diplomáticas ni de otra índole con esa autoridad ilegal, y a que desistiesen de ayudarla o estimularla por medio alguno. El Comité condenó las acciones de todos los Estados que no habían dado cumplimiento a las resoluciones ya aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y en particular Portugal y el régimen racista de Sudáfrica. Al reconocer que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno del Reino Unido para poner fin al régimen de Smith eran inadecuadas y habían fracasado, el Comité señaló a la atención del Secretario General la terrible situación reinante en Rhodesia del Sur y le pidió que advirtiese al Presidente del Consejo de Seguridad, dado que la cuestión ya figuraba en el programa de dicho Consejo, a fin de que tomase disposiciones para presentarlo en el Consejo para que éste adoptase las medidas necesarias.

345. En estas circunstancias, el Comité consideraba que había llegado el momento de adoptar enérgicas sanciones mandatorias conforme a los Artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas, dado que las medidas ya adoptadas habían demostrado ser inadecuadas. El Comité instó solemnemente al Gobierno del Reino Unido una vez más a que aplicase la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, de 20 de noviembre de 1965, cumpliéndose sus obligaciones para con los 4 millones de habitantes autóctonos de Rhodesia del Sur y pusiese fin inmediatamente al régimen racista ilegal de Ian Smith en Rhodesia del Sur, haciendo honor en realidad a sus propios compromisos.

346. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que la declaración del Presidente reflejaba exactamente los puntos de vista y la grave preocupación de los miembros del Comité Especial. Las llamadas sanciones no habían dado resultado, sencillamente, y al paso que iban continuarían fracasando miserablemente.

347. Los representantes del Reino Unido habían recordado constantemente al Comité que la cuestión de Rhodesia del Sur incumbía al Gobierno del Reino Unido. Eso era perfectamente cierto: la cuestión de Rhodesia del Sur no era más que una continuación del colonialismo y esa responsabilidad recaía plenamente sobre el Gobierno del Reino Unido. El empeoramiento

de la situación exigía la aplicación de sanciones mandatorias y el bloqueo económico total de África meridional, incluso el recurso a la fuerza armada para desalojar al régimen racista ilegal de Ian Smith.

348. Desde el día de la declaración unilateral de independencia se advirtió al Gobierno del Reino Unido que la aplicación de sanciones económicas poco enérgicas no daría resultado y que la única forma de acabar con el régimen ilegal era recurrir a la fuerza y aplastarlo. Teniendo en cuenta que habían transcurrido cinco meses desde esa declaración, había llegado el momento de recurrir a medidas más enérgicas. Las medidas económicas adoptadas hasta ahora no habían dado ningún resultado; todo el mundo sabía que el régimen de Smith conseguía petróleo de Portugal y de Sudáfrica, por sólo mencionar dos países. Un petrolero acababa de entrar en el puerto de Beira, y la delegación del orador no era tan ingenua como para creer que el buque no entregaría su cargamento a pesar de las seguridades de los británicos. Otro petrolero se estaba acercando a Beira; pero, esos dos barcos eran los únicos, naturalmente, que habían tenido tanta publicidad.

349. Los colonialistas de Sudáfrica y de Portugal estaban haciendo todo lo posible para proporcionar al régimen de Smith todo cuanto necesitaba. Ya no era posible considerar la cuestión de Rhodesia del Sur, bien sea económicamente o de otro modo, aislándola del resto del África meridional. La región estaba dominada por un sistema de oligarquías financieras extranjeras que servían de pantalla al régimen ilegal de Smith. Rhodesia del Sur había estado vendiendo su cosecha de tabaco callada pero seguramente. Había podido conseguir una cuantiosa inversión extranjera en una empresa molinera y de elaboración del maíz. Se informaba además que había vendido grandes cantidades de azúcar y de mineral de hierro a ciertas compañías japonesas. Un artículo publicado en *The New York Times* el 5 de abril se refería a los intermediarios ubicados en países vecinos que compraban y vendían para los comerciantes de Rhodesia sin ser descubiertos. La única forma de impedir ese tráfico consistía en vigilar las fronteras de Rhodesia con guardias armados que confiscasen las mercaderías que salgan de Rhodesia del Sur o ingresen al país. Por desgracia, se permitía a los agentes del régimen de Smith que llevaran a cabo abiertamente campañas de publicidad en los Estados Unidos y en otros países.

350. Lo que su delegación consideraba de suprema importancia era el destino de los 4 millones de africanos y su derecho a gobernar su propia tierra. La continuación del régimen de Smith representaba una constante amenaza para la paz y seguridad internacionales en el corazón mismo de África. En Rhodesia del Sur existía hoy un Estado policía armado; se detiene, encierra, tortura y asesina a los nacionalistas africanos. En esas circunstancias su delegación consideraba que todo cuanto se decía acerca de las sanciones económicas no era más que una estratagema para apartar la atención de los sufrimientos del pueblo africano de Zimbabue. Se aceptaba en general que el régimen de Smith constituía una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, y había llegado con creces el momento de adoptar medidas enérgicas y eficaces para derrocar ese régimen y devolver el país a sus legítimos dueños.

La única forma de hacer justicia en Rhodesia del Sur era recurrir a la fuerza. El orador confiaba en que el Gobierno del Reino Unido cumpliría sus obligaciones. Había recurrido a la fuerza para imponer su dominación en otras colonias y no había razón para que no recurriera ahora a la fuerza para restablecer la justicia. Sería ese un proceder excepcional que sería muy aplaudido. Hasta la Iglesia Episcopal de Rhodesia del Sur y el Primado de la Iglesia Anglicana habían pedido que se recurriera a la fuerza. El Capítulo VII y el Artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas mostraban claramente lo que había que hacer. La fuerza de las armas era lo único que permitiría aplastar al régimen de Smith. El Comité tenía el deber de recomendar claramente al Consejo de Seguridad que adoptara las medidas necesarias de conformidad con el Artículo 42 de la Carta. Su país había apoyado siempre la lucha del pueblo de Zimbabue contra la esclavitud y su colonialismo y consideraba esa lucha como parte de su propia campaña por la liberación total de África, por el desarrollo y por la paz. Por lo tanto, su delegación cooperaría de buen grado con todas las delegaciones que estuvieran dispuestas a actuar en ese sentido.

351. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas agradeció al Presidente su clara exposición sobre la situación actual en Rhodesia del Sur. La Unión Soviética, consecuente con su posición de principio, apoyaba el derecho del pueblo de Zimbabue a la libertad y la verdadera independencia. El Gobierno de la Unión Soviética había condenado al régimen de Smith y había calificado la declaración unilateral de independencia de nuevo crimen de los colonialistas contra el atormentado pueblo de Zimbabue. Los círculos oficiales del Reino Unido pretendían oponerse al régimen de Smith y procurar activamente su caída; pero los hechos demostraban que la realidad era todo lo contrario. Con la Constitución de 1961 el Reino Unido había echado las bases del actual régimen racista; más tarde había armado a los racistas de Rhodesia del Sur y había alentado una unión colonial entre Rhodesia del Sur y Sudáfrica y las colonias portuguesas. Y así, Rhodesia del Sur se convirtió en un Estado policiaco. El Reino Unido no podría librarse nunca de su responsabilidad por la tragedia nacional del pueblo de Zimbabue.

352. Podría alegarse que el actual Gobierno del Reino Unido no era responsable por los hechos pasados. El orador señalaría, sin embargo, que el Gobierno laborista no había tomado medida alguna para derogar la Constitución de 1961 ni se había declarado dispuesto a hacer efectivas las decisiones de las Naciones Unidas sobre la concesión de una independencia verdadera al pueblo de Zimbabue; y a juzgar por diferentes declaraciones hechas por los dirigentes del partido laborista, no tenía la intención de hacerlo.

353. El 11 de noviembre de 1965 en su resolución 2024 (XX) la Asamblea General había condenado la declaración unilateral de independencia y había invitado al Reino Unido a aplicar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas para poner fin a la rebelión. Al día siguiente el Consejo de Seguridad en su resolución 216 (1965) había pedido encarecidamente a todos los Estados que no reconociesen al régimen ilegal de Rhodesia del Sur y se abstuviesen de prestarle asistencia. El 20 de noviembre de 1965 el Consejo de Se-

guridad había aprobado la resolución 217 (1965) en la que exhortaba al Gobierno del Reino Unido a aplastar la rebelión de la minoría racista, a adoptar todas las demás medidas apropiadas que resultasen eficaces para poner fin inmediatamente al régimen de la minoría en Rhodesia del Sur y a adoptar medidas inmediatas para que el pueblo de Rhodesia del Sur pudiese decidir su propio porvenir de conformidad con los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

354. Un respetable número de Estados Miembros de las Naciones Unidas había adoptado ya las medidas necesarias para hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad. En diciembre de 1965 el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana había decidido imponer a Rhodesia del Sur un bloqueo económico total y cortar todas las comunicaciones con dicho país. En virtud de esa decisión se había negado a los aviones con rumbo a Rhodesia del Sur el derecho a volar sobre los países africanos interesados. Las decisiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad habían sido apoyadas por la abrumadora mayoría de los Estados Miembros. Hasta el 18 de marzo se habían recibido comunicaciones de cincuenta y ocho países que anunciaban la adopción de medidas concretas contra el régimen de Smith, y continuaban llegando comunicaciones sobre ese tema. La Unión Soviética, que había apoyado sistemáticamente la lucha de los pueblos contra la dominación colonial, había informado al Secretario General¹⁰ que estaba dispuesta a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad. La Unión Soviética no reconocía al régimen de Smith; no le había suministrado armas, equipo o material militar y no mantenía relaciones económicas con él. La Unión Soviética había cortado las comunicaciones postales y las telecomunicaciones con el régimen de Salisbury, y estaba dispuesta a colaborar con los países africanos para facilitar todo el apoyo posible al pueblo de Zimbabwe en su lucha.

355. El Reino Unido, que como Potencia administradora era fundamentalmente responsable por la trágica situación existente en Rhodesia del Sur, no había aplicado las decisiones de las Naciones Unidas. Aunque había afirmado que las sanciones económicas y financieras aplastarían la rebelión en pocas semanas, la ineficacia de dichas sanciones había sido reconocida por el mismo Sr. Smith, por la prensa del Reino Unido y de los Estados Unidos, por funcionarios del Reino Unido y por representantes de países africanos. Las sanciones habían sido adoptadas demasiado tarde y el régimen racista de Rhodesia del Sur había tenido tiempo de prepararse. El Reino Unido no había anunciado el embargo de petróleo hasta el 17 de diciembre de 1965, o sea, cinco semanas después de la declaración unilateral de independencia. La prohibición total de comerciar con Rhodesia del Sur sólo se había impuesto el 30 de enero de 1966, dos meses y medio después de la rebelión de los racistas y de la resolución del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos no habían prohibido oficialmente las exportaciones a Rhodesia hasta el 18 de marzo de 1966. Las sanciones autorizaban excepciones que los Estados Unidos, el Reino Unido y

otras Potencias occidentales aprovechaban para seguir comerciando con Rhodesia del Sur. Las cifras publicadas por la Junta de Comercio del Reino Unido demostraban que en febrero, es decir, con posterioridad al embargo total impuesto por el Reino Unido, el valor de las importaciones del Reino Unido procedentes de Rhodesia del Sur ascendían a 523.000 libras esterlinas, y sus exportaciones a 672.000 libras. Las exportaciones de tabaco de Rhodesia del Sur al Reino Unido habían alcanzado a 484.000 libras esterlinas, aunque las importaciones oficiales de tabaco procedente de Rhodesia habían quedado prohibidas a partir del 11 de noviembre de 1965. Esas cifras demostraban la "eficacia" de las supuestas sanciones económicas.

356. El régimen de Smith estaba siendo ayudado por sus asociados en esta impía alianza; Portugal y Sudáfrica estaban haciendo perder valor a las sanciones económicas. El Sr. Swart, Presidente de la República de Sudáfrica, había declarado el 21 de enero de 1966 que el Gobierno de Sudáfrica mantendría relaciones normales con el régimen de Rhodesia del Sur y no tomaría parte en ninguna sanción o boicot. El Ministro portugués de Relaciones Exteriores había anunciado el 25 de noviembre de 1965 que Portugal mantendría relaciones normales con el Gobierno de Rhodesia del Sur. Como podía comprobarse por las noticias de la prensa y en el documento de trabajo de la Secretaría (véanse párrafos 1 a 335 *supra*), Verwoerd y Salazar estaban ayudando a su amigo Ian Smith a resolver el problema del embargo de petróleo; los envíos mensuales de productos petrolíferos a Rhodesia del Sur procedentes de Sudáfrica y Mozambique eran iguales al consumo mensual de esos productos en Rhodesia del Sur bajo el actual sistema de racionamiento. La vida económica de Rhodesia del Sur no se veía complicada por falta de petróleo; los ferrocarriles funcionaban normalmente y, pese a las negativas de Portugal, había testigos que aseguraban que se estaba enviando petróleo por ferrocarril a Rhodesia del Sur desde Lourenço Marques.

357. Con la ayuda de sus amigos en los países occidentales, el régimen de Smith estaba eludiendo también las sanciones financieras. Después de la rebelión racista el Reino Unido había bloqueado las reservas de Rhodesia depositadas en Londres. Pero, el régimen racista había hecho sus preparativos; todas las reservas, con excepción de 9 millones de libras, habían sido sacadas de Londres y depositadas en bancos de Sudáfrica y Europa. Como podía verse en el párrafo 198 del documento de trabajo, las reservas de que disponían las autoridades de Salisbury se calculaban en 13 millones de libras. Más aún, el régimen de Smith tenía reservas de oro en barras. El valor de la producción anual de oro de Rhodesia del Sur era de 7 millones de libras.

358. El embargo a la venta de tabaco resultaba igualmente ineficaz. La víspera de su declaración de independencia el régimen de Smith había conseguido vender la cosecha de tabaco de 1965. El embargo estaba siendo violado no solamente por Sudáfrica y Portugal sino también por el Reino Unido, los Estados Unidos y otras Potencias occidentales.

359. Las sanciones estaban siendo saboteadas también por poderosos monopolios internacionales, que

¹⁰ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966, documentos S/7068 y Add.1.*

abiertamente ayudaban a los racistas de Rhodesia a burlar el embargo de petróleo. Los productos petrolíferos que suministraba Sudáfrica a Rhodesia del Sur se producían en instalaciones controladas por los monopolios internacionales del petróleo, entre los que se incluyen la Shell, la British Petroleum, la Mobil Oil y la Caltex. Esos productos se enviaban a Rhodesia del Sur en tanques de la British Petroleum, compañía en la que súbditos del Reino Unido tenían el 56% de las acciones. Como afirmó *The New York Times* del 26 de febrero de 1966, las sucursales de la Mobil Oil y la Caltex en Rhodesia del Sur se habían quejado a sus principales de que el comercio estaba siendo absorbido por las grandes compañías del Reino Unido, que estaban trayendo petróleo clandestinamente al país. Los monopolios petrolíferos del Reino Unido y los Estados Unidos no trataban en absoluto de ocultar su falta de cooperación con el embargo de petróleo.

360. El papel subversivo de los monopolios quedaba demostrado por las tentativas recientes para reanudar el bombeo de petróleo a través del oleoducto de Beira-Umtali. El oleoducto pertenecía a la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia, cuyo capital estaba controlado por la Lonrho Ltd., una compañía británica (62,5%), y por intereses portugueses (37,5%). Se había explicado que la decisión de reanudar el bombeo había sido tomada por los portugueses, que tenían mayoría en la Junta Directiva de la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia. Resultaba difícil creer, sin embargo, que una compañía que era dueña de dos tercios de las acciones no tuviera voz en el asunto.

361. En cuanto a las ventas del tabaco en Rhodesia del Sur, los monopolios continuaban "los negocios como siempre".

362. A pesar de conocer esas violaciones, el Gobierno del Reino Unido no había tomado ninguna medida eficaz para asegurar la aplicación de las sanciones. No obstante sus intercambios diplomáticos con Grecia y las negociaciones con Lisboa, y a pesar de la inspección constante de las fuerzas armadas del Reino Unido, un petrolero que llevaba petróleo para el régimen de Smith había logrado alcanzar las costas de Mozambique y anclar a dos millas de Beira.

363. Era claro, pues, que la responsabilidad de la situación existente en Rhodesia del Sur recaía primordialmente sobre el Reino Unido y los países que, por medios directos o indirectos, estaban violando la resolución del Consejo de Seguridad del 20 de noviembre de 1965. La delegación de la Unión Soviética estaba plenamente de acuerdo con las delegaciones afroasiáticas en que el Comité Especial debía pedir al Consejo de Seguridad que volviera a examinar urgentemente la cuestión de Rhodesia del Sur con miras a adoptar medidas, en virtud de la Carta, para conseguir que se aplicaran las decisiones de las Naciones Unidas, incluso la resolución del 20 de noviembre de 1965 del Consejo de Seguridad.

364. El representante de Etiopía apoyó la declaración del Presidente. Su delegación esperaba que la declaración fuera adoptada por consenso del Comité; de otra forma, se vería obligada a presentar un proyecto de resolución.

365. El Gobierno del Reino Unido no había podido aplastar la rebelión, fundamentalmente porque no

quería hacerlo. Si hubiera querido, hubiese enviado tropas como ha enviado a muchas partes de África y Asia. Sólo la fuerza podía aplastar la rebelión; el fracaso de las sanciones económicas era obvio.

366. El representante de la India felicitó al Presidente por su declaración clara y concisa, que reflejaba los sentimientos de una gran mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esa declaración constituía un eficaz pronunciamiento provisional que concentraría la atención de la comunidad mundial y del Consejo de Seguridad en la explosiva situación que el Gobierno del Reino Unido había permitido que se produjera en Rhodesia del Sur.

367. El representante de Malí agradeció al Presidente su declaración, que reflejaba la preocupación de la mayoría de los miembros del Comité Especial.

368. Malí consideraba que Rhodesia del Sur era una colonia y no reconocía el régimen ilegal y racista de la minoría establecido en Salisbury. Su delegación estaba convencida de que el Gobierno del Reino Unido era plenamente responsable por la situación existente en Rhodesia del Sur. En Adén y en la Guayana Británica el Reino Unido no había vacilado en suspender constituciones, revocar asambleas y gobiernos elegidos por sufragio universal y arrestar a los funcionarios contra la voluntad del pueblo. En Rhodesia, sin embargo, el mismo Gobierno daba pruebas de complacencia y actuaba en complicidad con una minoría de colonos blancos que practicaba la discriminación y explotaba cínicamente a la gran mayoría de la población africana, en violación de los derechos humanos y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

369. El orador celebraría saber qué intentaba hacer el Gobierno del Reino Unido para asegurar la aplicación de las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas y aplastar la rebelión en Rhodesia del Sur.

370. El representante de Bulgaria manifestó que la declaración del Presidente debía ser transmitida, como expresión de la opinión de todo el Comité Especial, a todos los que deberían adoptar medidas eficaces para derrocar el régimen racista de Rhodesia del Sur.

371. Las medidas adoptadas por el Reino Unido y otros países, que seguían siendo el principal sostén de la minoría racista de Rhodesia del Sur, eran deliberadamente ineficaces. Los regímenes racistas como el de Sudáfrica sabían que podían contar con el apoyo de los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos. A pesar de que habían transcurrido seis meses desde la adopción de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre Rhodesia del Sur, el régimen ilegal de Rhodesia continuaba existiendo y violando los derechos más elementales de la abrumadora mayoría de la población. Era alentador observar que gran número de Estados Miembros habían respondido pronta y positivamente a los llamamientos hechos por el Consejo de Seguridad; pero las medidas adoptadas por ciertos gobiernos — y en especial por el Gobierno del Reino Unido — habían resultado ineficaces.

372. El representante de Yugoslavia afirmó que la declaración del Presidente había señalado las causas, consecuencias e implicaciones de la situación actual en Rhodesia del Sur y la medida en que el Gobierno del Reino Unido era responsable de esa situación. Al pe-

dir que se aplicase el Artículo 42 de la Carta, el Presidente había indicado una solución que podría darse al problema. Por ello, la delegación yugoslava apoyaba plenamente la declaración. Si el Comité quería cumplir con su deber y seguir siendo un órgano importante y autorizado de las Naciones Unidas, debería adoptar forzosamente medidas más severas.

373. El representante del Irak dijo que cuando su delegación se había referido en una sesión reciente a la situación cada vez más grave en Adén, lo había hecho no sólo porque los que estaban siendo maltratados eran sus hermanos y amigos, sino también porque la causa de la libertad y la independencia era indivisible. Si se permitía que se hiciera sufrir a la población de Adén, los culpables se animarían a hacer lo mismo en otras partes del mundo. Por lo tanto, su delegación condenaba enérgicamente los acontecimientos de Rhodesia del Sur, la inactividad del Reino Unido y el apoyo dado por Sudáfrica y Portugal al gobierno minoritario de Rhodesia del Sur. Debía instarse al Reino Unido a que cumpliera plenamente sus obligaciones y pedirse al Consejo de Seguridad que considerara nuevamente la situación.

374. Otra razón que explicaba el gran interés de su delegación en este asunto era que todo debate sobre la cuestión de Rhodesia del Sur le recordaba un caso similar, el de Palestina. También allí había habido una Potencia Mandataria, colonos y un embargo. El orador había prevenido a la Asamblea General, en su decimoctavo período de sesiones, que lo que había ocurrido en Palestina ocurriría en Rhodesia del Sur, y su predicción se había cumplido: en Rhodesia del Sur una Potencia administradora estaba ayudando a una minoría a apoderarse ilegalmente del país y estaba haciendo todo lo posible por alentar a los colonos y a los invasores, mientras 4 millones de personas padecían bajo el yugo del colonialismo.

375. Su delegación apoyaba por lo tanto la clara y enérgica declaración hecha por el Presidente, y estaría dispuesta a apoyar todo proyecto de resolución en el que se pidiera a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad que adoptara medidas más enérgicas para obligar a la Potencia administradora a cumplir las responsabilidades que le impone la Carta de las Naciones Unidas y para asegurar que se haga entrar en razón a los que estaban haciendo caso omiso de las decisiones y resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

376. El representante de Siria asoció su delegación a las que habían apoyado la declaración del Presidente, que reflejaba la grave preocupación con que todos los miembros seguían el problema de Rhodesia del Sur.

377. Las declaraciones del representante de la Potencia administradora sobre la cuestión de Adén y la cuestión de Rhodesia del Sur daban la impresión de que los problemas se resolverían pronto, la independencia llegaría y los regímenes rebeldes se desmoronarían. Pero lo cierto era que el colonialismo seguía existiendo. Poco podía agregarse a los argumentos decisivos expuestos por los representantes de Tanzania y de la Unión Soviética con respecto al Gobierno del Reino Unido y a las medidas que estaba adoptando el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. El Comité se encontraba ante una situación grave que demostraba que no

se hacía ningún caso de los derechos humanos y de las resoluciones de las Naciones Unidas. No se debía tratar de quitar importancia a la responsabilidad del Comité como órgano representante del consenso de las Naciones Unidas y no podía haber dudas en cuanto a la orientación que debían seguir los trabajos del Comité.

378. La delegación de Siria apoyaba la sugerencia del Presidente de que se remitiera la cuestión al Consejo de Seguridad a fin de que invocase en este caso el Artículo 42 de la Carta.

379. El representante del Reino Unido dijo que le había sorprendido oír los términos de la declaración del Presidente en cuanto parecían sugerir que reflejaban una opinión general, cuando hasta ese momento ninguna opinión había sido expresada por las delegaciones ni por el Comité en conjunto. Tampoco podía esperarse que su delegación aceptara las observaciones hechas por el Presidente y otros representantes acerca de la política y los actos de su Gobierno.

380. Desde luego, su delegación y su Gobierno nunca habían subestimado la gravedad de la situación creada por la declaración ilegal de independencia en Rhodesia del Sur ni por los acontecimientos recientes. Así se lo había expresado inequívocamente en todas las declaraciones hechas por la delegación del Reino Unido en el Consejo de Seguridad o en cualquier otro órgano de las Naciones Unidas.

381. En ese preciso momento los Ministros del Reino Unido estaban examinando en Londres todo el problema de Rhodesia a la luz de los últimos acontecimientos. También estaba reunido en Londres el Comité de Sanciones del *Commonwealth*, que había sido creado en la Conferencia de Lagos en enero de 1966. Además, y en cuanto se refería a los acontecimientos últimos, el Gobierno del Reino Unido estaba en contacto, a un alto nivel ministerial, con el Gobierno de Portugal.

382. El orador reservó la posición de su delegación con respecto a las declaraciones hechas durante la sesión.

383. El representante de los Estados Unidos de América dijo que había ciertos pasajes de la declaración del Presidente a los que su delegación no podía asociarse. Por lo tanto, reservó la posición de su Gobierno sobre el particular.

384. El representante de Dinamarca manifestó que, aunque su delegación estaba plenamente de acuerdo con gran parte de la declaración del Presidente, reservaba su posición respecto a ciertos puntos de la declaración hasta haber tenido tiempo de estudiar el texto más detenidamente.

385. El representante de Italia dijo que su delegación, como varias otras, estaba de acuerdo con gran parte de lo dicho por el Presidente; pero que había ciertos puntos sobre los cuales se veía obligado a reservar por el momento la posición de su Gobierno.

386. El representante de Australia también quería reservar su posición con respecto a la declaración del Presidente. Su delegación no estaba preparada para analizar detalladamente en este momento muchas de las cosas que se habían dicho.

387. El representante del Uruguay manifestó que su delegación estaba de acuerdo con la idea de que el

Presidente hiciese una declaración sobre la cuestión de Rhodesia del Sur por haber creído necesario subrayar la gravedad y la urgencia de la cuestión. Su delegación apoyaba, en general, la declaración del Presidente que era, sin embargo, sumamente detallada y que hasta cierto punto sustituía a una resolución que se habría aprobado después del debate correspondiente. Por lo tanto, reservaba el derecho de su delegación a presentar observaciones sobre ciertos aspectos de la declaración más adelante, cuando hubiera tenido tiempo de estudiar detenidamente la declaración y de recibir las instrucciones del caso.

388. El representante de Chile dijo que la posición de su delegación con respecto a la declaración del Presidente coincidía con la del representante del Uruguay. Si bien concordaba en general con la declaración, no podía comprometer a su Gobierno sobre ciertos puntos de detalle sin recibir instrucciones. Por lo tanto, su delegación se reservaba el derecho a presentar observaciones sobre este asunto en otra sesión.

389. El representante de Venezuela dijo que su delegación estaba de acuerdo en que la situación en Rhodesia del Sur era grave y en que el Comité Especial y otros órganos adecuados de las Naciones Unidas debían adoptar medidas eficaces para poner término a esa situación ilegal. Su delegación había apoyado la idea de que el Presidente hiciese una declaración para subrayar la gravedad y la urgencia de la cuestión. Pero la declaración había sido mucho más amplia de lo que se había esperado y había ciertos puntos que su delegación estimaba necesario considerar con el mayor cuidado. No podía adoptar una posición con respecto a la declaración sin consultar a su Gobierno y, por lo tanto, reservaba su derecho a presentar observaciones sobre el particular más adelante.

390. El representante de Afganistán dijo que su delegación celebraba comprobar que había una amplia esfera de acuerdo entre los miembros del Comité en cuanto a la gravedad de la situación en Rhodesia del Sur y a la necesidad de adoptar medidas eficaces para poner remedio a esa situación. Le había complacido oír al representante del Reino Unido decir que su Gobierno no había subestimado nunca la gravedad del asunto. Dicho representante había reconocido también el carácter ilegal de los actos de las autoridades de Rhodesia del Sur. Pero de las declaraciones de la mayoría de los miembros parecía desprenderse claramente que no consideraban suficientemente eficaces las medidas que estaba adoptando el Reino Unido.

391. La delegación de Afganistán celebraba la declaración del Presidente y no veía ninguna contradicción entre el espíritu de esa declaración y la preocupación unánime que sentían los miembros del Comité. Su delegación consideraba que ciertos puntos de la declaración eran meras recomendaciones, basadas en el acuerdo general de los miembros del Comité de que debía señalarse a la atención del Consejo de Seguridad la urgencia y la gravedad de la cuestión de Rhodesia del Sur. Por lo tanto su delegación, teniendo en cuenta el debate del Comité, apoyaba de todo corazón el espíritu de la declaración del Presidente.

392. El representante de Polonia dijo que su delegación apoyaba de todo corazón la declaración del Presidente, que reflejaba perfectamente la preocupación

de su delegación por la grave situación en Rhodesia del Sur.

393. El representante de Túnez asoció su delegación a todas las que habían apoyado plenamente la declaración del Presidente. Su delegación, lo mismo que otras, había tenido la intención de presentar un proyecto de resolución provisional en esa sesión, por considerar que la gravedad de los acontecimientos de Rhodesia del Sur y el hecho de que la Potencia administradora no hubiese adoptado ninguna medida eficaz para poner término a la situación y al régimen ilegal de Rhodesia del Sur exigían una acción inmediata. Pero estaba dispuesta a aceptar la declaración del Presidente, que reflejaba su posición y que, a su juicio, correspondía a la opinión general de los miembros.

394. Su delegación consideraba que el problema era suficientemente grave como para exigir una acción urgente del Consejo de Seguridad, al que debía pedirse que adoptara medidas eficaces para poner término a la deplorable situación en Rhodesia del Sur. Su delegación consideraba también que convendría expresar, en nombre de las Naciones Unidas y del Comité Especial, la preocupación que inspiraba ese problema.

395. Las reservas del representante del Reino Unido no habían extrañado a su delegación. Pero ese problema ya se había debatido tantas veces en las Naciones Unidas que la sorpresa demostrada por el representante del Reino Unido parecía exagerada. Era evidente que la situación no podía durar indefinidamente y que había llegado el momento de adoptar otras medidas.

396. El representante del Irán asoció su delegación a las que habían hablado en apoyo de la declaración del Presidente. La situación era grave y requería medidas más eficaces para hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Como sabían los miembros del Comité Especial, Irán había sido uno de los primeros países en prohibir la venta de petróleo a Rhodesia del Sur, y esa prohibición había sido escrupulosamente observada.

397. El representante de Madagascar dijo que su delegación apoyaba la declaración del Presidente, que reflejaba plenamente la gravedad de la situación y la preocupación general de los miembros del Comité.

398. El representante de la Costa de Marfil dijo que las varias reservas que se habían hecho no podrían quitar mérito a la declaración del Presidente, que reflejaba la opinión de la delegación de la Costa de Marfil.

399. Era imposible pensar en la cuestión de Rhodesia sin recordar que unos pocos meses atrás Ian Smith había pedido al Reino Unido que concediera la independencia a Rhodesia del Sur y amenazado con declarar unilateralmente la independencia si la Potencia administradora no accedía a esa petición. Ian Smith había cumplido ciertamente su amenaza. Parecería que ya no impera la razón y que el Gobierno de Smith, a pesar de las exhortaciones que se le habían hecho y de la forma en que la opinión mundial lo había condenado, creía tener derecho a mantener esclavizados a 4 millones de patriotas negros.

400. El Reino Unido, que había venido a las Naciones Unidas a explicar sus dificultades y a obtener ayuda para sofocar la rebelión de Rhodesia, había ago-

tado todos los medios, y mientras tanto el régimen de Ian Smith seguía en pie y estaba cada día más fuerte. Todo ello era contrario a los principios que consagra la Carta. Sorprendía a la delegación de la Costa de Marfil la debilidad de las medidas que el Gobierno del Reino Unido decía haber adoptado para derrocar el régimen de la minoría blanca de Rhodesia del Sur. La delegación de la Costa de Marfil estaba convencida que, fiel a la idea que lo había llevado a presentar la cuestión al Consejo de Seguridad hacía algunos meses, ese Gobierno del Reino Unido debía adoptar inmediatamente nuevas medidas para sofocar la rebelión de Rhodesia.

401. Su delegación apoyaba la declaración del Presidente y esperaba que el Consejo de Seguridad tendría pronto la oportunidad de considerar la cuestión de Rhodesia a la luz de los recientes acontecimientos.

402. El representante de Etiopía hizo notar que ya en abril de 1965 el Comité Especial había señalado a la atención del Consejo de Seguridad la gravedad de la situación en Rhodesia del Sur y había pedido al Gobierno del Reino Unido que tomase medidas urgentes en ese Territorio. Posteriormente el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución 202 (1965) sobre Rhodesia del Sur, cuyas disposiciones hizo suyas la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) el 25 de octubre de 1965. Después de la declaración unilateral de independencia, el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución 217 (1965), en que se encañecía a todos los Estados que rompiesen todas sus relaciones económicas con Rhodesia del Sur y establecieran el embargo sobre el petróleo y sus productos. Pese a todos estos esfuerzos, era más necesario que nunca que se tomasen medidas para restituir los derechos de la población africana, y era parte importante de los deberes del Comité utilizar el foro de las Naciones Unidas para mantener informada a la opinión mundial sobre la cuestión y reiterar su llamamiento a la conciencia del Gobierno del Reino Unido.

403. Si no fuera por la tragedia humana que configuran, podrían calificarse de farsa los recientes acontecimientos de Rhodesia del Sur. La única conclusión que podía extraerse de esa serie de acontecimientos era que la Potencia administradora sabía desde el principio que se produciría una toma ilegal del poder por parte del Gobierno de Ian Smith. Ese Gobierno había rechazado la oferta del Reino Unido de establecer una Real Comisión para enmendar la Constitución de 1961, y a sus negociaciones con el Reino Unido, celebradas en octubre de 1965, había seguido casi inmediatamente el anuncio del Sr. Smith de que Rhodesia del Sur sería independiente hacia la Navidad de 1965. Los preparativos hechos por el Gobierno en las semanas siguientes habían sido evidentemente un preludio a la declaración unilateral de independencia del 11 de noviembre de 1965 y a la asunción del poder total por la minoría ilegal.

404. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido se había mostrado notablemente renuente a exhibir su habitual firmeza al enfrentarse con el desorden y la ilegalidad. Había impuesto algunas sanciones vagas e inefectivas, habiendo dicho ya claramente que, en caso de una declaración unilateral de independencia, no se recurriría a la fuerza. El anuncio hecho por el Sr.

Wilson el 11 de noviembre de 1965 de que su Gobierno no preveía ninguna medida de carácter nacional o internacional contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur sólo había contribuido a que este régimen se consolidase. Por lo tanto, no era sorprendente que en la declaración de independencia se hubiera insistido tanto en los vínculos de "parentesco y amistad". En tanto que el Sr. Wilson decía al mundo que si el legítimo Gobernador de Rhodesia del Sur pidiera ayuda el Reino Unido consideraría plenamente esta petición, se impedía la publicación en Rhodesia del Sur de la proclama del Gobernador despidiendo de sus cargos a Ian Smith y a sus ministros. Aun cuando se había privado al Gobernador de todos los atributos de su cargo, el Sr. Wilson no había considerado que hubiese todavía suficiente provocación como para justificar medidas prácticas. Tampoco la intimidación en masa de la población africana había convencido al Gobierno del Reino Unido de la urgente necesidad de actuar.

405. En la reunión de Primeros Ministros del *Commonwealth*, celebrada en Lagos, Nigeria, en enero de 1966, el Sr. Wilson había convenido finalmente en que no podría excluirse el uso de la fuerza si resultara necesario para restablecer el orden público. La necesidad de usar la fuerza para desalojar al régimen ilegal había quedado suficientemente demostrada; toda ulterior demora equivaldría a un apoyo deliberado a Ian Smith y a los rebeldes que lo acompañaban. Ya el 25 de octubre de 1965 la Organización de la Unidad Africana había pedido que se recurriera a la fuerza y también lo hicieron la Iglesia Episcopal de Rhodesia y el Arzobispo de Canterbury.

406. La forma desganada con que se aplicaban las sanciones económicas había justificado plenamente el escepticismo de Etiopía. Al igual que las seguridades dadas por el Reino Unido de que no se usaría la fuerza, el carácter gradual de las sanciones estaba destinado a reducir el efecto de cada etapa y ayudar más a los rebeldes. Se había declarado ilegal la compra de tabaco sólo si ese tabaco estaba destinado a la venta en el extranjero. Gracias al embargo, el cobre de Rhodesia del Sur podía venderse en el mercado libre a precio más elevado, dando una ganancia adicional de unos 3 millones de libras esterlinas anuales. Grandes empresas extranjeras continuaban suministrando a Rhodesia del Sur repuestos y equipos sin cargo.

407. La premeditada lenidad del Gobierno del Reino Unido contrastaba con la firme posición adoptada por los regresivos Gobiernos de Sudáfrica y Portugal. Tanto antes como después de la declaración unilateral de independencia, el Gobierno de Verwoerd había declarado que mantendría relaciones económicas y de otra índole en Rhodesia del Sur. Aun antes de la declaración unilateral Portugal había reconocido *de facto* la soberanía de Rhodesia del Sur al aceptar al Sr. Reedman como "Jefe de la Misión de Rhodesia" en Lisboa.

408. El fracaso del embargo sobre el petróleo era catastrófico. La corriente de petróleo que entraba en Rhodesia del Sur aumentaba en lugar de disminuir; desde Sudáfrica y Mozambique llegaban diariamente 70.000 galones de combustible. Recientemente barcos cisterna griegos habían desafiado al Reino Unido dirigiéndose hacia Beira. Los depravados colonialistas portugueses habían dicho claramente que el petróleo que

entraba a los territorios por ellos subyugados llegaría a Rhodesia del Sur. Se había explicado que la poca disposición del Gobierno del Reino Unido a usar la fuerza en esta cuestión respondía al deseo de evitar la pérdida de vidas. Sin embargo, el hecho de que se estuvieran perdiendo vidas en las prisiones racistas de Rhodesia del Sur y que se hubieran perdido vidas en Kenia, la Guayana Británica, la India y Adén no parecía causar ninguna preocupación al Reino Unido. Dado que Rhodesia del Sur dependía del petróleo para satisfacer solamente un 27% de sus necesidades de energía, y tenía toda la ayuda que necesitaba a este respecto, la única solución era usar la fuerza directa, firme e inequívoca. Para que las sanciones económicas fuesen efectivas, el Gobierno del Reino Unido tendría que usar la fuerza contra Sudáfrica y Portugal, pero como el Gobierno del Reino Unido ya había desechado el uso de la fuerza aunque fuese contra los colonos, era evidente que no lo haría contra estos dos Estados.

409. El Comité Especial debía recomendar con urgencia al Consejo de Seguridad que tomase una decisión sobre la adopción de medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII de la Carta para poner fin a la situación altamente explosiva de Rhodesia del Sur. La delegación de Etiopía había recomendado la adopción de estas medidas durante el examen de la cuestión por el Consejo de Seguridad en noviembre de 1965. Junto con muchas otras delegaciones, no estaba satisfecha con la forma en que el Consejo de Seguridad había tratado recientemente la cuestión de Rhodesia del Sur. El proyecto de resolución presentado por el Reino Unido y aprobado por el Consejo el 9 de abril de 1966 era limitado e inadecuado en muchos aspectos. Desgraciadamente, las enmiendas presentadas por los tres miembros africanos del Consejo con el propósito de reforzar y ampliar el texto habían sido rechazadas. El Comité Especial debía, pues, solicitar una reunión urgente del Consejo para examinar la cuestión de Rhodesia del Sur a la luz del Capítulo VII de la Carta.

410. El representante de Australia declaró que en algunos sectores había una grave equivocación en lo referente a las políticas y medidas del Gobierno de Australia con respecto a la situación de Rhodesia del Sur. Sin embargo, la posición del Gobierno de Australia había sido explicada claramente en muchas declaraciones y, particularmente, en la nota de 28 de enero de 1966 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Australia¹¹. Las sanciones económicas del Gobierno de Australia contra Rhodesia del Sur no constituían meramente declaraciones de principio a falta de vínculos económicos, sino una interrupción real de comercio, con los consiguientes sacrificios económicos. Aunque había sido necesario pasar por ciertos procedimientos parlamentarios, la acción del Gobierno de Australia había sido rápida y había quedado terminada el 16 de noviembre de 1965; en otras palabras, antes de la resolución del Consejo de Seguridad de 20 de noviembre de 1965. Las medidas económicas detalladas en el documento S/7104 significaban que Australia había aplicado un embargo sobre el 93% de sus importaciones procedentes de Rhodesia del Sur.

411. El 29 de diciembre de 1965 el Primer Ministro de Australia había declarado que su Gobierno consideraba ilegal la declaración unilateral de independen-

cia y no daría reconocimiento diplomático al nuevo régimen. Había afirmado que sólo podía llegarse a un arreglo del problema sobre la base de un sostenido progreso hacia el régimen de la mayoría y la eliminación de la discriminación racial. Había hecho mención de la necesidad de un programa de educación como preparación para el régimen de la mayoría. El Primer Ministro había dicho que Australia apoyaba las sanciones del Reino Unido y había impuesto sus propias sanciones. Australia consideraba que las sanciones económicas inducirían a un regreso a la mesa de negociaciones; se oponía a las propuestas de usar la fuerza armada en Rhodesia del Sur y apoyaba la resolución del Consejo de Seguridad de 9 de abril de 1966.

412. El representante de Dinamarca dijo que después de la última ocasión en que el Comité había debatido la cuestión de Rhodesia del Sur, el régimen de Smith había declarado independiente a ese país con el fin de crear en la parte meridional de África otro Estado más basado en la discriminación racial. Ese régimen proseguía su rumbo ilegal, desafiando a las autoridades legítimas de Londres y haciendo caso omiso de varias resoluciones de las Naciones Unidas. En la resolución 217 (1965) el Consejo de Seguridad exhortaba al Reino Unido a que aplastara la rebeldía de Rhodesia del Sur, y encarecía a todos los Estados que no reconocieran el régimen ilegal de Ian Smith e hicieran lo posible para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur. La delegación danesa deploraba que algunos gobiernos no parecieran inclinados a cumplir aquella resolución, como se había visto recientemente cuando el Consejo de Seguridad había tenido que exhortar al Reino Unido para que emplease la fuerza, si fuera necesario, con el fin de impedir ciertas infracciones no disimuladas del embargo de petróleo contra Rhodesia del Sur.

413. Dadas las circunstancias, estaba claro que el Consejo de Seguridad era el órgano adecuado de las Naciones Unidas para abordar este asunto. La delegación de Dinamarca estimaba que, al aprobar las resoluciones de 20 de noviembre de 1965 y 9 de abril de 1966, el Consejo había demostrado su intención de derribar el régimen de Smith con miras a establecer una genuina independencia con igualdad de derechos para todos los grupos de la población de Rhodesia del Sur. Parecía haber un acuerdo virtualmente unánime sobre ese objetivo, y sería trágico que no pudieran zanjarse las diferencias de opinión acerca del modo de conseguirlo.

414. La delegación danesa hubiera estimado más conveniente que la cuestión se reanudase en el Consejo de Seguridad en el momento adecuado, en vez de abordarla ahora el Comité. El Consejo de Seguridad era el único órgano de las Naciones Unidas facultado para hacer recomendaciones o tomar decisiones sobre las medidas solicitadas, y dicha delegación no creía que cualquier otro órgano de las Naciones Unidas, con número limitado de miembros, debía intentar ejercer influencia directa en las decisiones del Consejo, cuya composición y situación en la estructura de las Naciones Unidas brindaban la garantía óptima de que el problema se abordaría de un modo realista y eficiente, y de que sus resoluciones se aplicarían eficazmente.

415. Era alentador observar que toda la comunidad internacional — con pocas excepciones — se había

¹¹ *Ibid.*, documento S/7104.

puesto al lado del Gobierno del Reino Unido en la prueba de fuerza entre ese Gobierno y el régimen de Salisbury. El desenlace de la acción comenzada contra el régimen de Smith tendrá repercusiones de gran alcance que afectarán, entre otras cosas, a la situación de toda la zona meridional de África. Por estas razones y de acuerdo con su tradicional política positiva respecto de las Naciones Unidas, Dinamarca se atenía estrictamente a lo que disponía la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad y había informado en tal sentido al Secretario General¹². Su Gobierno estimaba que cualquier acción contraria a esa resolución era reprensible, inmoral e irresponsable. No podría evitar la caída del régimen de Smith y las consecuencias de una conducta semejante serían quizás no menos graves para aquellos que en el momento actual jugaban con el fuego. Había tomado nota de las repetidas declaraciones del Gobierno del Reino Unido a efectos de que dicho Gobierno cumpliría con su deber en la resolución del problema constitucional rhodesio. También había tomado nota de las medidas adoptadas por el Reino Unido para conseguir tal fin y estaba plenamente seguro de que el Reino Unido haría todo cuanto fuera necesario para realizar su intención explícita de derribar el régimen de Smith. El hecho de que ese régimen hubiera conseguido hasta ahora mantenerse en el poder demostraba que seguía siendo necesario actuar con energía, y que esta actuación enérgica no podría ser eficaz si en ella no había estrecha cooperación entre el Reino Unido y los demás Miembros de las Naciones Unidas.

416. El orador sugirió que, una vez concluido el examen de la cuestión, el Comité Especial transmitiese al Consejo de Seguridad las actas oficiales del debate.

417. El representante de la India dijo que los acontecimientos recientes demostraban que era esencial actuar con urgencia y eficacia si se quería derribar al régimen rebelde de Smith. Cada vez se veía más claro que el solo intento de imponer sanciones a Rhodesia del Sur no ayudaría a conseguir el objetivo común de liberar a la oprimida mayoría africana de aquel Territorio. Como su delegación había indicado en el Consejo de Seguridad el 12 de noviembre de 1965, no se debía ver la cuestión de Rhodesia del Sur aislándola de otros problemas coloniales y raciales de África, ya que ella estaba íntimamente vinculada a la opresión racista y colonial en África Sudoccidental, Angola, Mozambique y la llamada Guinea portuguesa. Ese hecho quedaba probado una vez más por la confabulación de los tres gobiernos coloniales racistas del sur de África para perpetuar allí la supremacía blanca.

418. Los representantes del Gobierno del Reino Unido habían dicho a menudo a los miembros que Rhodesia del Sur era asunto que incumbía a ese Gobierno. La delegación de la India estaba dispuesta a aceptarlo en cuanto significaba que el inquietante estado de cosas en Rhodesia del Sur era resultado de la política del Gobierno del Reino Unido. En cambio, si lo que se quería dar a entender era que las Naciones Unidas carecían de jurisdicción para debatir el asunto y recomendar medidas, la delegación india rechazaba categóricamente tal aserto. En efecto, el propio Gobierno del Reino Unido había recurrido al Consejo de Seguridad en noviembre de 1965 para que respaldase

las medidas económicas que estaba promulgando para afrontar la situación. Se había afirmado repetidamente, en resoluciones del Comité Especial y de la Asamblea General, que Rhodesia del Sur era un Territorio no autónomo en el sentido del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y que le era aplicable la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Por ello las Naciones Unidas tenían el derecho y hasta el sagrado deber de hacer cuanto pudieran para ayudar al sufrido pueblo africano de Zimbabwe a conseguir su objetivo, la independencia política, sobre la base del sufragio universal de los adultos.

419. Desde un principio, el Gobierno del Reino Unido no había cumplido sus deberes para con la población mayoritaria de Rhodesia del Sur. Durante más de cuarenta años se había dejado amenazar y coaccionar por unos cuantos centenares de blancos del Territorio. Aunque los errores cometidos por el Gobierno del Reino Unido entre 1923 y 1965 se podían explicar achacándolos a la inexperiencia, o a ignorancia de los motivos deshonestos de la población blanca del sur de África, no podía aplicarse el mismo rasero a los actos del Reino Unido en 1965. Los racistas de Rhodesia le habían advertido una y otra vez que su único objetivo era independizarse por completo del Reino Unido en condiciones fijadas por ellos. El Gobierno británico había adoptado siempre una actitud blanda en sus negociaciones con el régimen ilegal de Salisbury, y había alentado a los colonos blancos en sus fraudulentos propósitos al asegurarles que no se emplearía la fuerza en ningún caso. Después de esa seguridad, nada podía impedir a Ian Smith proseguir su desastrosa política.

420. El 11 de noviembre de 1965, pocas horas después de que el gobierno ilegítimo de Rhodesia del Sur había asumido el poder, el Primer Ministro del Reino Unido había comunicado al Parlamento que el Gobierno británico no pensaba valerse de fuerzas nacionales ni internacionales para obligar al régimen ilegal de Rhodesia del Sur a asumir una postura acorde con la constitución. Aunque el Gobierno del Reino Unido había declarado que la usurpación del poder por el régimen de Smith constituía rebeldía, no había adoptado medida alguna eficaz para aplastarla. El que no se hubiera restablecido la norma constitucional en Rhodesia del Sur pasaría a la historia como la gran traición del Gobierno del Reino Unido a la confianza que en él había puesto el pueblo africano.

421. El embargo del petróleo — medida anunciada al cabo de un retraso crítico de cinco semanas — estaba condenado al fracaso. Los blancos de Rhodesia del Sur no habían sufrido gran cosa por el embargo y otras sanciones económicas, ya que podían contar con petróleo y otros suministros procedentes de Portugal y Sudáfrica, sus vecinos racistas y coloniales. El Gobierno de Sudáfrica se había apresurado a declarar que no participaría en sanciones económicas contra Rhodesia del Sur. Por el documento de trabajo de la Secretaría (párrafos 1 a 335, *supra*) se veía claro que el Gobierno sudafricano no había escatimado esfuerzos para ayudar a sus congéneres racistas de Rhodesia del Sur. El 22 de noviembre de 1965 el "Trade Commissioner" de Sudáfrica había podido comunicar que el comercio entre ambos países había recobrado el nivel que tenía antes de la declaración ilegal de indepen-

¹² *Ibid.*, Vigésimo Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965, documento S/7005.

dencia. No era posible determinar la cantidad exacta de petróleo y derivados que Sudáfrica estaba enviando a Rhodesia del Sur, ya que el Gobierno sudafricano había dejado de establecer distinción entre exportaciones y reexportaciones en sus cifras comerciales. Sin embargo se calculaba que se trata de 35.000 a 70.000 galones de petróleo diarios. Además, de Mozambique aflúa diariamente cierta cantidad de petróleo, calculada en 35.000 a 40.000 galones. Se tenían esperanzas de que la prohibición de exportar tabaco asestase un tremendo golpe a la economía de Rhodesia del Sur, pero el hecho era que el Gobierno de Smith había podido garantizar a los colonos blancos la venta de su tabaco a los precios mínimos fijados por ellos.

422. En este marco era como había que ver el asunto de los dos petroleros. Aunque el suministro adicional de petróleo de ambos buques ayudaría sin duda al régimen de los colonos, la economía de Rhodesia del Sur no necesitaba del petróleo sino para el 27% de su demanda de energía. Además, Rhodesia del Sur había acumulado ya reservas suficientes de petróleo, y Mozambique no era la única fuente de suministro, ni la más importante. El atribuir desmedida importancia a los petroleros era exagerar su papel y distraer así la atención de la fuente principal de suministro, que era Sudáfrica. Si el Reino Unido y otros países deseaban sinceramente aplicar presión a los extremistas blancos de Rhodesia del Sur, habría que tomar medidas eficaces para cortar todas las fuentes que surten al país de lo necesario.

423. La política del Gobierno indio en este asunto había sido clara y firme. La India no reconocía al régimen ilegal de Smith. Había pedido repetidamente al Gobierno del Reino Unido que derogase la Constitución de 1961 y que convocase una conferencia constitucional a la que asistieran todos los sectores de la población, para redactar una constitución democrática basada en el principio de un voto por persona. Había cortado todas las relaciones diplomáticas y económicas con Rhodesia del Sur. Había cooperado plenamente con las Naciones Unidas, con el Comité Especial y con la Organización de la Unidad Africana en sus esfuerzos por ayudar al pueblo de Zimbabwe a conseguir la verdadera independencia. El Gobierno de la India estaba convencido de que contra el rebelde régimen de Smith había que adoptar medidas concretas y eficaces, entre ellas el uso de la fuerza.

424. El representante de Malí dijo que el problema de Rhodesia del Sur iba siendo más inquietante cada día y que todos comprendían la necesidad de adoptar medidas apropiadas. Su delegación deploraba la persistente negativa del Reino Unido a cumplir las resoluciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Comité Especial sobre la materia. El Reino Unido había comparecido recientemente ante el Consejo de Seguridad para dar al mundo la impresión de que estaba preocupado y deseaba la intervención del Consejo. Había buscado la aprobación de medidas vagas de dudosa eficacia. En realidad, había venido a abogar en favor de la seguridad del Sr. Smith y a protegerlo contra cualquier intervención armada de las Naciones Unidas. La Autoridad Administradora había tratado de ganar tiempo para que Smith y su pandilla pudiesen afianzar su posición. Había habido gran alboroto con motivo de un buque, mientras toneladas de

petróleo llegaban a Rhodesia del Sur a través de Sudáfrica.

425. El Gobierno del Reino Unido había declarado que no usaría tropas en Rhodesia del Sur, asegurando así a Smith que el Reino Unido utilizaría su influencia en el Consejo de Seguridad para impedir todo recurso a la fuerza. En realidad había sido el Gobierno del Reino Unido el que por propia iniciativa y en virtud de la Constitución de 1961 había entregado armas y poder militar a los racistas, no obstante las advertencias de los Estados africanos. Le era imposible, por lo tanto, pretender que no podía desarmar a la ilegal pandilla racista. Si el Reino Unido tenía autoridad gubernamental en Rhodesia del Sur, debía restaurar allí inmediatamente la ley y el orden, mediante el uso de la fuerza si fuese necesario. Una rebelión no podía manejarse con paciencia con la esperanza de que los rebeldes capitulasen. Smith y su pandilla habían declarado que preferían morir antes que entregar el poder a la mayoría.

426. Habían pasado meses desde que el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución del 20 de noviembre de 1965. El único resultado había sido dar tiempo a Smith para que reorganizase su estructura económica y recuperase la estabilidad después de la conmoción inicial. El Gobierno del Reino Unido se negaba a emplear la fuerza, aunque no había vacilado en arrestar a hombres como Ghandi, Nehru, Jagan, Nkrumah y el Arzobispo Makarios. No había vacilado en emplear la fuerza en Nyasalandia, Kenia y Adén para llevar a cabo matanzas de ciudadanos indefensos. En aquellos casos, desde luego, se trataba de gentes de color, mientras que en Rhodesia del Sur se trataba de colonos blancos. La única explicación de la inacción del Gobierno del Reino Unido era que era culpable de prejuicio racial y discriminación.

427. Las fuerzas reaccionarias del racismo y el fanatismo de Rhodesia del Sur habían sido apoyadas y alentadas durante mucho tiempo por círculos financieros poderosos del mundo occidental. Sudáfrica y Portugal, en especial, les habían dado ayuda directa y estímulo; actuaban de acuerdo con el régimen de Smith para perpetuar la supremacía blanca y la explotación económica de los africanos. Los monopolios extranjeros habían celebrado el éxito de Smith y la indulgencia del Reino Unido porque tenían sucursales en Rhodesia del Sur. Al no tomar las medidas necesarias para aplastar el régimen de Smith, el Reino Unido asumía una grave responsabilidad por las consecuencias que pudiesen producirse. El Reino Unido estaba echando la culpa a Portugal y se negaba a tomar o a permitir que se tomase medida alguna contra Sudáfrica. Como se afirmaba en un artículo aparecido en *The New York Times* del 12 de abril de 1966, el Reino Unido y Sudáfrica eran, en cierto sentido, "rehenes económicos el uno del otro" y no se sabía hasta qué punto podría el Reino Unido apoyar sanciones contra Sudáfrica. Esas dudas estaban justificadas, ya que el Reino Unido tenía intereses económicos enormes en Sudáfrica y ocupaba el tercer lugar entre sus clientes.

428. Los países africanos compartían la preocupación de ciertos círculos de los Estados Unidos acerca de la necesidad de adoptar energéticas medidas si se quería que el régimen de Smith fuera derrocado en un

futuro próximo. La delegación de Malí apoyaría toda resolución en que se pida la aplicación del Capítulo VII de la Carta, principalmente de los Artículos 41 y 42, y el empleo de la fuerza para aplastar al régimen de la minoría blanca en Rhodesia del Sur.

429. El representante de Túnez declaró que desgraciadamente la mayor parte de las resoluciones sobre la cuestión de Rhodesia habían sido letra muerta, mientras la situación en ese país se había ido haciendo cada vez más inquietante. Rhodesia del Sur era un país colonizado, donde un puñado de colonos, aprovechando la pasividad de la Potencia administradora, había usurpado la autoridad en provecho propio e impuesto al pueblo indígena un régimen opresor que estaba provocando la indignación de todo el mundo. Por cierto que, en vez de cooperar con las Naciones Unidas, la Potencia administradora había repetido constantemente que los problemas de Rhodesia del Sur estaban dentro de su esfera exclusiva de responsabilidad y competencia. El empeoramiento de la situación, la insistencia de las Naciones Unidas y la posición asumida por los países africanos no habían podido hacer que el Reino Unido admitiese que su política estaba errada. No obstante sus muchas declaraciones de intención, la Potencia administradora no había cumplido la resolución del Consejo de Seguridad del 20 de noviembre de 1965. Contrariamente a lo que afirmaba el Primer Ministro del Reino Unido, las sanciones económicas no habían quitado fuerza política a Ian Smith ni habían debilitado la economía de Rhodesia del Sur.

430. El Reino Unido debiera haber previsto que las sanciones serían ineficaces mientras el régimen de Smith pudiese contar con la complicidad de Sudáfrica y Portugal. En todo el mundo se ponía seriamente en duda la eficacia de las sanciones auspiciadas por el Gobierno del Reino Unido y todos estaban de acuerdo en que había llegado el momento de buscar medidas más apropiadas y más eficaces. Desde un principio los Estados africanos habían previsto la ineficacia de las sanciones económicas y habían tratado de persuadir al Reino Unido de que empleara otros medios, principalmente la intervención armada. Desgraciadamente ese Gobierno se había aferrado a su política y se había negado a emplear la fuerza. Sólo cuando dos buques tanque se habían dirigido a Beira con petróleo para Rhodesia del Sur, se había decidido el Reino Unido a pedir autorización al Consejo de Seguridad para impedir que los buques tanque descargaran el petróleo. Pero el resultado de la crisis de Rhodesia no dependía de la entrega de petróleo a través del oleoducto de Umtali. El embargo de petróleo sería sólo parcial mientras Rhodesia del Sur pudiera conseguir grandes cantidades de petróleo a través de Sudáfrica. Disponía de tanto petróleo que había podido disminuir el racionamiento de gasolina en Rhodesia del Sur.

431. El Reino Unido se veía en la necesidad de emplear medios más apropiados. Ya fuera que decidiera enviar tropas a Rhodesia del Sur o pedir una nueva acción por intermedio de las Naciones Unidas, era indispensable que demostrase su sincera determinación de aplastar el régimen de Smith y permitir que el pueblo de Rhodesia recuperase sus derechos y realizara sus aspiraciones nacionales. Todo el mundo saldría ganando, y en especial el propio Reino Unido, si la Potencia administradora se decidiera a colaborar con la

Organización. Túnez consideraba que sólo la intervención armada del Reino Unido o de las Naciones Unidas podría hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General y librar a África del régimen racista de Smith.

432. El representante de Sierra Leona dijo que, aunque después de muchos años de maniobras para asegurar la perpetuación del dominio blanco en Rhodesia del Sur el Reino Unido había prestado por fin oídos suficientes a la opinión mundial para hacer un cierto reconocimiento simbólico de los derechos de los africanos en el Territorio, no había hecho en cambio tentativa alguna de trazar una recta que los llevase a la independencia. En la crisis actual el Reino Unido se estaba comportando con lamentable debilidad y su única respuesta a la declaración unilateral de independencia de Ian Smith había sido solicitar sanciones. La forma como había procurado hacer recaer las culpas sobre otros y eludir la cuestión principal de la independencia equivalía, realmente, a una duplicidad.

433. La urgencia con que la delegación del Reino Unido había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad contrastaba decididamente con el método algo lento que había sugerido el día anterior en el Comité Especial y planteaba serias dudas sobre la sinceridad o los motivos del Gobierno del Reino Unido. El 6 de abril la delegación del Reino Unido había reservado su derecho a presentar sus observaciones sobre el consenso de la mayoría de los miembros del Comité Especial en la forma en que había sido expuesto por el Presidente, en cuya exposición se sugería que había llegado el momento de que el Consejo de Seguridad considerara la posibilidad de actuar en virtud de los Artículos 41 y 42 de la Carta. Sus reservas sugerían que el Reino Unido consideraba que este asunto era de su exclusiva incumbencia y no de la del Comité Especial. Pero al día siguiente, no obstante no haber cambiado la situación de los petroleros frente a la costa de Mozambique, el Gobierno del Reino Unido había decidido que el asunto era urgente y había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad, en el curso de la cual había presentado un proyecto de resolución.

434. El proyecto de resolución trataba de hacer recaer sobre el Gobierno de Portugal la responsabilidad que correspondía al Gobierno del Reino Unido y se limitaba a la cuestión del embargo sobre el petróleo. Ese proyecto de resolución pedía al Consejo de Seguridad que diera al Reino Unido un mandato, mandato que el Consejo ya le había dado claramente en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 217 (1965). Esa maniobra del Reino Unido era una tentativa para justificar su retraso de casi cuatro meses en hacer efectiva la resolución del Consejo de Seguridad. Además, al concentrar la atención en el petróleo, trataba de desviarla de los problemas más amplios del gobierno mayoritario y la independencia para Rhodesia del Sur.

435. Si, según sostenía el Gobierno del Reino Unido, Rhodesia del Sur era una colonia, parecía increíble que ese Gobierno pudiera desear que las Naciones Unidas recomendasen la adopción de cualquier medida contra su propia colonia. En casos similares, como el de los pretendidos motines de la Guayana Británica y el del movimiento de liberación de Adén, el Reino Unido

había empleado tropas; pero cuando se trataba de Rhodesia del Sur el Reino Unido se mostraba reacio a enviar tropas a aquel país. Sin embargo, era alentador advertir que por fin el Gobierno del Reino Unido se había convencido de que la situación de Rhodesia del Sur constituía una amenaza a la paz y había solicitado sanciones obligatorias contra Rhodesia del Sur de conformidad con el Capítulo VII de la Carta. Desde la declaración unilateral de independencia del 11 de noviembre de 1965, la sanción más grave impuesta por el Reino Unido y otros países había sido la relacionada con el petróleo. En un informe preparado a petición del Secretario General, titulado *The Economics and Logistics of and Embargo on Oil and Petroleum Products of Rhodesia* se afirmaba que la economía de Rhodesia podría sufrir apreciablemente por el embargo; pero que si se trataba de sobrevivir, la disponibilidad de petróleo aparentemente no sería de por sí la consideración decisiva; que al parecer era poco lo que se había pensado seriamente en la realidad de un embargo sobre el petróleo y que parecía haberse tenido por supuesto básico el acceso continuado a suministros de petróleo del exterior.

436. Todo ello implicaba claramente que el Sr. Smith y su régimen ya tenían entendido previamente que recibirían petróleo. El petróleo llenaba sólo el 27% de las necesidades de energía de Rhodesia y se empleaba primordialmente para lubricación y para el transporte por carretera, mientras que sus industrias y la agricultura dependían más del carbón y de la electricidad de la presa de Kariba. El propio Sr. Smith había manifestado que la entrada de petróleo en Rhodesia del Sur estaba aumentando en lugar de disminuir. Informes dignos de crédito indicaban que Rhodesia del Sur recibía la mayor parte de ese petróleo a través de Sudáfrica y Mozambique. Según el documento de trabajo preparado por la Secretaría (párrafos 1 a 335, *supra*), Sudáfrica había decidido dejar de distinguir en sus cifras comerciales entre las exportaciones y las reexportaciones, por lo que se había hecho mucho más difícil averiguar si Sudáfrica estaba sirviendo o no de conducto para las exportaciones de Rhodesia del Sur sometidas a embargo, o proporcionándole ese petróleo comprendido en el embargo. Esta práctica era una tentativa del Gobierno de Sudáfrica para ocultar sus tratos inicuos con Rhodesia del Sur, y evitar al mismo tiempo la posibilidad de un embargo contra la propia Sudáfrica.

437. El Gobierno de Sierra Leona había declarado siempre que las sanciones por sí solas no derribarían el régimen de Ian Smith ya que permitían demasiadas escapatorias. Portugal y Sudáfrica, por ejemplo, habían declarado que no aplicarían sanciones contra Rhodesia del Sur. Rhodesia del Sur podía contar también con la ayuda de algunos países que pretendían estar proyectando sanciones, pero dejaban escapatorias que permitían la entrega de suministros de casi toda clase.

438. El Primer Ministro de Sierra Leona había manifestado en varias conferencias internacionales que a menos que el Reino Unido decidiera emplear la fuerza en Rhodesia del Sur, sería muy poco lo que se podría conseguir. No se podía dar ningún crédito al argumento del Reino Unido de que las sanciones por sí solas derribarían el régimen de Smith. Habían transcurrido cinco meses desde que Smith declaró ilegal-

mente la independencia. Estaba recibiendo suministros de petróleo, la cosecha de tabaco se había vendido y podía disponer de divisas extranjeras por conducto de Sudáfrica y otros países. En Panamá, Sudáfrica, Londres y los Estados Unidos había hombres de negocios que podían eludir las sanciones y estaban dispuestos a hacerlo, ya que la mayoría de esos países no habían impuesto a sus ciudadanos la obligación de respetar esas sanciones.

439. Cuando la Asamblea General había aprobado la resolución 2024 (XX) por la que condenaba la declaración unilateral de independencia, lo que principalmente había chocado a los Estados Miembros era que más de 4 millones de africanos se encontraron bajo la dominación de 220.000 blancos. Los Estados que estaban en mejores condiciones para contribuir a aliviar esa intolerable situación eran precisamente los mismos que habían tratado de ayudar al régimen de Smith por todos los medios posibles. Ello se debía, sin duda, a que no creían que esa situación constituía una amenaza a su forma de vida.

440. Durante el debate en el Consejo de Seguridad, Malí, Nigeria y Uganda habían presentado una enmienda al proyecto de resolución del Reino Unido por la que se pediría al Gobierno de Sudáfrica que adoptase todas las medidas necesarias para impedir el abastecimiento de petróleo a Rhodesia del Sur¹³. Las delegaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido habían estimado que no podían votar a favor de esa enmienda, aunque su efecto habría sido meramente ampliar el embargo a la única otra ruta conocida de abastecimiento de petróleo.

441. Lo único que se podía deducir era que el embargo de petróleo estaba siendo respetado sólo de palabra; que se dejaban las puertas totalmente abiertas al suministro de petróleo; que las Potencias citadas no estaban dispuestas a ejercer presión contra Sudáfrica y estaban condonando con su negligencia lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

442. En su resolución 1514 (XV) y en resoluciones sucesivas la Asamblea General había dado al Comité Especial un mandato bien claro de liberar a todos los seres humanos que se encontraban aún bajo el dominio colonial. Los criterios que se habían de emplear para determinar si un país era libre, habían sido establecidos en otras resoluciones y las condiciones que prevalecían en Rhodesia del Sur eran la antítesis misma de esos criterios.

443. El Comité tenía el deber muy claro de liberar a los 4 millones de africanos de Rhodesia del Sur y debía pedir al Reino Unido que lo hiciera mediante el uso de la fuerza. Todos los Estados que fueran sinceros apoyarían cualquier embargo y ayudarían al Reino Unido a resolver el problema, facilitando armas cuando correspondiese. El Reino Unido tenía un deber para con el pueblo de Rhodesia del Sur en su conjunto; no debía eludir esa responsabilidad sino proceder enérgicamente y con determinación.

444. Debía derogarse la Constitución de 1961, que nunca había sido aceptada por la mayoría de la población. Debía castigarse la traición de Ian Smith y de

¹³ *Ibid.*, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7243.

su régimen y debía reprimirse con firmeza cualquier levantamiento que pudiera producirse como consecuencia de actos de los blancos de Rhodesia. Si se deseaba que la paz y la estabilidad imperasen en los países de Africa meridional se debería garantizar el retorno a un régimen de derecho en el plazo de unas pocas semanas. El Gobierno del Reino Unido debía aplicar inmediatamente la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a la colonia de Rhodesia del Sur.

445. La delegación de Sierra Leona apoyaría todo proyecto de resolución encaminado a afianzar la determinación del Reino Unido y a dar al Consejo de Seguridad una indicación clara de lo que debía hacer respecto a Rhodesia del Sur.

446. El representante de Siria subrayó la gravedad del problema de Rhodesia del Sur, con el que se consumaba la conquista de la tierra africana de Zimbabwe por una minoría europea. El carácter racista y reaccionario de esa situación tenía graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. El argumento invocado para justificar el sometimiento de 4 millones de africanos a la opresión y a la discriminación racial recordaba los peores días del colonialismo. Si se permitía que continuara esa situación comprometería totalmente la eficacia de las Naciones Unidas. El continente africano se sometería a esa tiranía; había tenido paciencia hasta ahora a fin de poner a prueba la capacidad de la Organización para cumplir los principios de su Carta.

447. En la conducta de la Potencia administradora había contradicciones fundamentales y una amplia disparidad entre las palabras y los hechos. La Potencia administradora afirmaba ser la única responsable por Rhodesia del Sur, pero las medidas que adoptaba para cumplir con esa responsabilidad eran tímidas, inadecuadas y débiles. La prohibición de vender tabaco de Rhodesia y enviar petróleo a Rhodesia del Sur había sido un fracaso. El Reino Unido había dramatizado el caso de dos barcos petroleros y pedido al Consejo de Seguridad que le autorizara a detenerlos; sin embargo, los suministros regulares y abundantes de petróleo procedente de Sudáfrica que recibía el régimen de Smith sólo provocaban sutiles protestas diplomáticas. El régimen de Verwoerd consideraba que el problema de Rhodesia del Sur en conjunto era un pequeño asunto interno y le importaba poco la suerte de 4 millones de africanos inocentes. Cuando la Asamblea General había examinado la política de *apartheid* en su vigésimo período de sesiones y se habían propuesto sanciones contra el régimen de Verwoerd, el Reino Unido se había opuesto a dichas sanciones alegando que no darían resultado, y se había apartado de la opinión de la abrumadora mayoría. El boicot era inútil mientras Sudáfrica y Portugal continuaran atendiendo impunemente a las necesidades vitales del régimen de Smith, mientras la Potencia administradora eludiera su responsabilidad so pretexto de que carecía de jurisdicción sobre los actos ilegales de esas dos Potencias coloniales.

448. En realidad, las medidas adoptadas para aplastar el régimen de Smith sólo hacían más tenaz su resistencia. La Potencia administradora se negaba a emplear la fuerza contra ese régimen, aunque la había usado con rapidez, eficacia y abundancia en otras circunstancias contra los que luchaban por liberarse del yugo colonial. Según la lógica del Reino Unido el em-

pleo de la fuerza contra las causas justas era legal, pero ilegal contra las causas injustas. Cuando el Primer Ministro del Reino Unido había aludido al empleo de tropas para evitar acontecimientos trágicos como la subversión o el asesinato, era probable que no hubiese pensado en la subversión de la minoría contra la mayoría, como era el caso en Rhodesia del Sur, sino en los esfuerzos de los africanos para organizar sus movimientos de liberación.

449. Se había dicho que las sanciones tenían por objeto inducir a Smith a negociar. Sin embargo, no se acostumbraba a negociar con criminales. Al fin y al cabo, las negociaciones significaban transacción, y no podía haber ninguna transacción sobre los derechos de 4 millones de africanos a la vida, la libre determinación, la independencia y la dignidad. Debía preguntarse al Reino Unido si tenía el propósito de cumplir su sagrada misión como Potencia administradora, o si esperaba que los acontecimientos santificasen la primacía de la fuerza sobre el derecho, como en otros casos trágicos.

450. Siria había adoptado una actitud inequívoca, y apoyaría la resolución más enérgica que recordase sus deberes a la Potencia administradora antes que fuera demasiado tarde.

451. El representante de Argelia, haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, declaró que, afortunadamente, el Reino Unido no había podido paralizar las actividades del Comité Especial iniciando un debate incompleto sobre la cuestión de Rhodesia del Sur en el Consejo de Seguridad, así como tampoco podía la resolución del Consejo de 9 de abril de 1966 desviar la atención de la búsqueda de una solución del problema de Rhodesia del Sur. El Consejo de Seguridad se había ocupado sólo de algunos aspectos marginales del problema, y el Reino Unido había establecido una distinción entre diferentes proveedores. Estaba dispuesto a hacer cumplir el embargo en el caso de un petrolero que se hallaba frente a la costa de Mozambique, pero mantenía una neutralidad que le resultaba algo incómoda con respecto a los convoyes por carretera enviados por Sudáfrica a Rhodesia del Sur.

452. El Reino Unido había querido impedir todo examen a fondo del problema de Rhodesia del Sur, porque temía que pudiera sacarse una enseñanza de lo ocurrido en los cinco meses pasados. A pesar del embargo Rhodesia recibía grandes cantidades de petróleo por carretera y ferrocarril, y sin un embargo general contra Sudáfrica era difícil imaginar cómo podría encontrar dificultades a ese respecto. Rhodesia del Sur podía vender su tabaco a través de intermediarios que lo hacían llegar a los mercados habituales. A pesar del fracaso todavía se afirmaba que las sanciones económicas producirían la caída del régimen *de facto* de Salisbury y que se necesitaban medidas graduales. Ese procedimiento, sin embargo, estaba sujeto a una doble limitación: la presión económica y financiera que ejercía Sudáfrica sobre el Reino Unido y la participación de Portugal en la OTAN.

453. Si Argelia hubiese estado convencida de que las recientes medidas del Reino Unido tenían por objeto suprimir el mal de raíz le habría prestado su apoyo completo e incondicional. Pero, en vez de ocuparse de los aspectos fundamentales del problema, el Reino Unido había desviado la atención internacional hacia un elemento secundario de la situación. Al limitar su acción

a los aspectos externos del problema, el Reino Unido había tratado de que el Consejo de Seguridad confirmase su determinación y buena voluntad en la cuestión de Rhodesia del Sur. En cuanto desviaba la atención hacia unas medidas de alcance necesariamente limitado, esa maniobra no hacía más que agravar el problema central.

454. Si el Reino Unido hubiese considerado que su acción en el interior de Rhodesia del Sur era inadecuada, podía haber pedido a la comunidad internacional ayuda adicional para ejercer presión sobre las autoridades de Salisbury e imponerles sanciones. Sin embargo, el Reino Unido había invertido las funciones. Como había eludido sus responsabilidades dentro de Rhodesia del Sur, estaba tratando de desviar el centro de gravedad de las mismas fuera de ese país mediante su reciente petición a las Naciones Unidas para que lo autorizaran a proceder en cierta forma. Esa actitud mostraba que el propio Reino Unido no creía en la posibilidad de derrocar al régimen de Smith por medio de medidas periféricas y que, en fin de cuentas, solamente lo que se hiciera directamente contra las autoridades de Salisbury podía ser eficaz y decisivo. Las medidas debían dirigirse también contra los regímenes de Pretoria y Lisboa. Si no se procedía en esa forma, se repetiría en Rhodesia del Sur la tragedia de Palestina, y se crearía una grave amenaza a la paz y a la estabilidad en Africa y en el resto del mundo.

455. La solución del problema se encontraba en la aplicación completa, fiel e inmediata de todas las recomendaciones formuladas por la Asamblea General y el Comité Especial. Además, ningún Estado Miembro debía mantener relación alguna con Rhodesia del Sur, la cual debía quedar completamente privada de todo abastecimiento. El bloqueo económico sólo podía concebirse como un bloqueo general. Debían aplicarse sanciones que incluyeran el empleo de las fuerzas armadas, en caso necesario, a todos los que no respetasen las medidas decretadas.

456. Las Naciones Unidas debían recordar a Sudáfrica que sus obligaciones en virtud de la Carta le exigían que respetase y cumpliera las decisiones de la Organización. Además de garantizar la supervivencia del régimen de Salisbury atendiendo a todas sus necesidades, las autoridades de Sudáfrica habían declarado que estaban dispuestas a mediar entre el Primer Ministro del Reino Unido y Ian Smith. Estaba preparado el escenario para que Sudáfrica llevase oficialmente sus "técnicas" de apartheid a Rhodesia del Sur. Era irónico que las autoridades de Pretoria ofrecieran su ayuda en una situación importada de Sudáfrica, que les había proporcionado una cínica satisfacción. Lejos de ayudar a abolir el régimen de Smith, algunas Potencias contribuían en realidad a mantener dicho régimen, para que se uniera a ellas en una política basada en los intereses propios y la dominación.

457. Argelia opinaba que vacilar en adoptar medidas contra Smith equivalía a aceptarlo como autoridad *de facto*. Apelaba, pues, a todos los Miembros de las Naciones Unidas para que denunciaran la complacencia de algunas Potencias con respecto al régimen de Salisbury. Los Estados Miembros debían comprender el peligro de la situación, que se había agravado con las recientes maniobras y podía perjudicar gravemente a la Organización.

458. El representante de Ghana, haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, dijo que, aun-

que el problema que había encontrado el Reino Unido en Rhodesia del Sur no carecía de precedentes en la historia de su administración colonial, el Reino Unido lo había tratado tan mal que ahora resultaba difícilísimo solucionarlo. Ghana había señalado constantemente en tribunas internacionales como la Organización de la Unidad Africana, la Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth* y las Naciones Unidas, la delicada naturaleza del asunto y las trágicas repercusiones que podrían esperarse si el Reino Unido no procedía con firmeza.

459. Ghana había hecho todos los esfuerzos posibles para situar la cuestión de Rhodesia del Sur en la debida perspectiva. En su búsqueda de una solución para el problema, en consulta con otros Estados africanos, Ghana había previsto la intransigencia del régimen minoritario de los colonos en su empeño de hacer caso omiso de la opinión mundial y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos y a la libre determinación de los pueblos. Había advertido que existía una vasta conspiración destinada a crear en Rhodesia del Sur condiciones de opresión análogas a las existentes en Sudáfrica y en las vecinas colonias portuguesas. El Gobierno del Reino Unido no había reaccionado rápidamente ante la actitud de desafío del régimen de Smith porque tenía intereses considerables en Rhodesia del Sur y porque la gente interesada era de su propia estirpe. Se había escudado entonces en argumentos engañosos y no había procedido como había procedido en otros territorios coloniales, como la Guayana Británica, Adén y Kenia. Esas vacilaciones de una Potencia administradora sólo podían conducir a la serie de acontecimientos que había culminado en la declaración unilateral de independencia que hiciera Ian Smith en noviembre de 1965. El régimen de Smith había estado seguro de que si aprovechaba la actitud manifiestamente dócil e indecisa del Gobierno del Reino Unido ante sus actos ilegales, induciría finalmente a dicho Gobierno a aceptar y respetar la independencia y soberanía que había proclamado unilateralmente.

460. En el momento de la declaración unilateral de independencia, cuando el régimen ilegítimo había hecho todo lo posible para impedir que los representantes de la Corona desempeñasen sus funciones administrativas, sólo había habido vacías declaraciones condenatorias y amenazas de sanciones del Reino Unido, que no había estado muy dispuesto al principio a aceptar que se decretara el embargo del petróleo contra el régimen rebelde.

461. En diversas resoluciones de la Asamblea General, así como en las resoluciones 216 (1965) y 217 (1965) del Consejo de Seguridad, se había pedido a todos los Estados que no reconocieran el régimen ilegal, que rompieran todas sus relaciones económicas con Rhodesia del Sur y que impusieran un embargo sobre el petróleo y sus productos. El Gobierno de Ghana y varios otros Estados Miembros habían convenido en poner a prueba la decisión de imponer sanciones. En cumplimiento de dichas resoluciones, Ghana se había negado a reconocer el régimen ilegal de Rhodesia del Sur y había roto totalmente las relaciones económicas con ese país; se había negado a reconocer los documentos de viaje emitidos o renovados por el régimen ilegal; había negado los servicios necesarios a todos los medios de transporte, incluso a los aviones procedentes de Rhodesia del Sur o con destino a ella, a los que no

se permitía volar sobre el territorio de Ghana; por último, había suprimido todos los medios de comunicación con Rhodesia del Sur, y Ghana no proporcionaba al régimen ilegal armas, equipos o material militar.

462. Ghana había puesto en vigor las sanciones económicas decretadas contra el régimen de Smith, aunque como otros muchos países abrigaba serias dudas sobre su efectividad, especialmente porque Portugal y Sudáfrica se habían negado a aceptarlas. Ghana comprendía que no se podría disuadir al régimen racista de Rhodesia del Sur adoptando resoluciones, puesto que Smith sabía que las naciones que se comprometían solemnemente a aplicar esas resoluciones no siempre lo harían en la práctica. La experiencia enseñaba que para ser efectiva la presión económica había de estar respaldada por la voluntad y la decisión de llevarla a la práctica. Como las sanciones se habían recomendado con la abstención de algunos países y la hostilidad secreta o abierta de otros, era evidente que estaban condenadas al fracaso.

463. Los acontecimientos recientes habían justificado los temores de Ghana. Todo el mundo sabía que Sudáfrica había ayudado al régimen minoritario blanco de Rhodesia del Sur para que pudiera sobrevivir al limitado embargo impuesto y que se estaba vendiendo la cosecha de tabaco de Rhodesia del Sur a ciertas grandes empresas internacionales. Los incidentes últimos con los buques cisterna griegos *Manuela* y *Joanna V* eran sólo algunos de los muchos ejemplos que demostraban el fracaso del embargo del petróleo recomendado por las Naciones Unidas.

464. Existía, al parecer, una confabulación entre varios países para que quedara sin efecto todo lo que hacían las Naciones Unidas para lograr que el régimen de Smith respetase los derechos de la mayoría africana. En dos comunicados dirigidos al Secretario General el 7 y el 8 de abril de 1966, el Gobierno de Portugal había señalado que las fuerzas aeronavales del Reino Unido disponían de los medios necesarios para impedir que los dos buques cisterna siguiesen su camino, pero que se habían abstenido deliberadamente de hacerlo. Había informado asimismo que las operaciones bancarias de pago se habían efectuado a través de bancos holandeses y que las compañías interesadas en el asunto eran de nacionalidad griega, panameña o sudáfrica. En vista de esos hechos el Gobierno de Portugal había rechazado toda responsabilidad por una situación a la que habían contribuido varios gobiernos extranjeros y que no podría haberse producido en contra de los deseos del Reino Unido.

465. Era evidente que el Reino Unido era el que debía derribar el régimen ilegal de Smith. Pero, según habían dicho los miembros africanos del Consejo de Seguridad hacía pocos días, ese país no estaba dispuesto a examinar las bases del problema a fin de buscar una solución honesta, justa y rápida.

466. Ghana había compartido el sentimiento de urgencia con el que el Reino Unido había solicitado el 9 de abril de 1966 una reunión del Consejo de Seguridad para pedirle un mandato que le permitiera proceder más enérgicamente para impedir que el buque cisterna *Joanna V* descargase en Beira el petróleo que llevaba. Pero el Consejo debía haber examinado la causa profunda de todo el problema de Rhodesia del Sur, en lugar de limitarse a adoptar decisiones superficiales y *ad hoc* que no tenían bastante alcance. Por esa razón

los miembros africanos habían propuesto enmiendas al proyecto de resolución del Reino Unido. Era significativo que el Reino Unido se hubiera negado a que se enmendara su proyecto de resolución a fin de pedir, no sólo a Portugal, sino también a Sudáfrica, que pudiesen en práctica las sanciones, aunque nadie ignoraba que Sudáfrica había estado minando los esfuerzos que se habían hecho para imponer sanciones económicas. Además, el representante del Reino Unido en el Consejo de Seguridad se había opuesto a todo debate sobre los problemas más amplios que planteaban las violaciones del embargo del petróleo, a pesar de ser ese indudablemente el momento más oportuno para pedir al Consejo de Seguridad que impusiese sanciones obligatorias.

467. La delegación de Ghana se preguntaba hasta cuándo se seguiría diciendo a las Naciones Unidas que el Reino Unido estaba celebrando consultas con los gobiernos del *Commonwealth* y que el Reino Unido estaba haciendo progresos graduales, mientras continuaba empeorando la situación en Rhodesia del Sur y el régimen ilegal de Smith se iba afianzando. Fuentes dignas de crédito habían informado que el *Joanna V*, que se encontraba en Beira, intentaba secretamente desembarcar parte de su cargamento y que el capitán del *Manuela* tenía la intención de descargar su petróleo en Lourenço Marques. Se decía ahora que otros dos buques cisterna habían salido de Venezuela con carga destinada a Rhodesia del Sur. Las Naciones Unidas estaban aún a tiempo para poner fin a ese estado de cosas, y las medidas correspondientes podrían adoptarse a instancias del Comité Especial, que era quien estaba encargado de velar por el cumplimiento de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

468. Ghana había pedido al Comité que se guiase por las resoluciones pertinentes adoptadas por la Organización de la Unidad Africana y por la Declaración Final de la reciente Conferencia Africana en la Cumbre, celebrada por once naciones en Nairobi. Era evidente que habían fracasado los métodos empleados por el Gobierno del Reino Unido para aplastar al régimen ilegal de Smith, fueran cuales fueran, y que debía instarse a dicho Gobierno a recurrir a otras medidas. Los Miembros de las Naciones Unidas debían dar pruebas de que podían colaborar en un esfuerzo colectivo consintiendo en la imposición de sanciones obligatorias; de lo contrario las Naciones Unidas fracasarían en sus esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales.

469. El representante de Polonia recordó que en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General su delegación había declarado que la política del Gobierno del Reino Unido en relación con Rhodesia del Sur era y había sido siempre incompatible con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La situación en Rhodesia del Sur había empeorado aún más desde entonces.

470. La delegación del Reino Unido había dado repetidamente seguridades de que mantenía control total sobre los acontecimientos de Rhodesia del Sur y de que las negociaciones pacíficas darían resultados. Pero los acontecimientos habían probado que eso sólo había servido para dar tiempo a Ian Smith para afianzarse y preparar la declaración unilateral de independencia. Por consiguiente, la política del Gobierno del Reino Unido de no cumplir con las resoluciones de las

Naciones Unidas relativas a Rhodesia del Sur había servido para preparar el camino a la usurpación del poder llevada a cabo por Smith. El Gobierno del Reino Unido había declarado más de una vez que sobre él recaía la responsabilidad de llevar a Rhodesia del Sur a la independencia, y el Comité Especial tenía derecho a pedir al Reino Unido que cumpliera sus obligaciones para con el pueblo oprimido de Zimbabue.

471. Habían transcurrido ya cinco meses desde la aprobación de las resoluciones 2022 (XX) y 2024 (XX) de la Asamblea General y de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, y el Comité Especial tenía la obligación de volver a examinar la situación. El documento de trabajo preparado por la Secretaría (párrafos 1 a 335, *supra*) enumeraba diversas declaraciones y varias *Orders-in-Council* del Gobierno del Reino Unido relativas a Rhodesia del Sur, pero no proporcionaba ninguna información especial sobre los resultados de esos actos.

472. El Sr. Wilson, Primer Ministro del Reino Unido, había declarado el 11 de noviembre de 1965 que la declaración unilateral de independencia del régimen de Smith era ilegal y constituía un acto de traición. Sin embargo, había excluido la posibilidad de intervención militar del Reino Unido en Rhodesia del Sur, salvo que fuese necesaria para mantener la ley y el orden, y había declarado que el único medio de derribar al régimen de Smith consistía en crear una situación en la que el propio pueblo de Rhodesia del Sur deseara sustituirlo por un gobierno legítimo. La delegación de Polonia estimaba que no existía ninguna duda en cuanto al deseo de la inmensa mayoría del pueblo de Rhodesia del Sur de que se estableciera un gobierno legítimo en lugar del de los usurpadores de Smith. El documento de trabajo de la Secretaría proporcionaba muchos ejemplos de huelgas y demostraciones en contra del régimen de Smith hechas por la población africana.

473. Si el Gobierno del Reino Unido hubiese deseado realmente derribar al régimen rebelde de Smith, no hubiera vacilado en proceder enérgicamente en su calidad de Potencia administradora responsable por Rhodesia del Sur. Pero lo cierto era que no estaba dispuesto a cumplir las obligaciones que le imponían las resoluciones de las Naciones Unidas. No había intervenido ni siquiera en circunstancias en que la actitud del régimen de Smith era abiertamente provocativa, y Ian Smith había aprovechado plenamente esa debilidad. Smith había impuesto una opresión brutal a la población africana, había modificado la Constitución, había desconocido la prerrogativa de gracia que correspondía a la Corona Británica y había privado al Gobernador de todos sus poderes, a pesar de lo cual el Gobierno del Reino Unido seguía afirmando que no había habido un quebrantamiento de la ley y el orden que justificase la intervención militar.

474. El 1º de diciembre de 1965 el Gobierno del Reino Unido había anunciado la imposición de severas restricciones financieras y de sanciones contra Rhodesia del Sur, y al día siguiente el régimen de Smith había anunciado contramedidas financieras contra el Reino Unido. Era de esperar que los actos de Smith provocasen una enérgica reacción del Gobierno del Reino Unido, y habían provocado ciertamente una reacción, aunque no la esperada, ya que el 14 de diciembre de 1965, el Gobierno del Reino Unido había revocado su decisión anterior y había autorizado la reanu-

dación del pago de pensiones del Reino Unido a los pensionistas de los servicios y de la administración civil de Rhodesia del Sur.

475. El 11 de noviembre de 1965 el Primer Ministro del Reino Unido había anunciado que quedaba totalmente prohibido comprar tabaco procedente de Rhodesia del Sur y el 1º de diciembre de 1965 había hecho extensiva la prohibición a casi todas las demás exportaciones de Rhodesia del Sur al Reino Unido; el 30 de enero de 1966 habían quedado totalmente prohibidas las exportaciones del Reino Unido a Rhodesia del Sur, con la excepción de determinados artículos que se requiriesen con fines humanitarios. A pesar de ello, el número de enero de la *Overseas Review* del Banco Barclays indicaba que el valor de las importaciones del Reino Unido procedentes de Rhodesia del Sur había ascendido en enero de 1966 a 3.814 millones de libras esterlinas, en tanto que el promedio mensual correspondiente a 1965 había sido de 2.300 millones de libras; y el *Times* de 31 de marzo de 1966 informaba que el valor de las importaciones de tabaco de Rhodesia del Sur al Reino Unido habían ascendido a 484.000 libras esterlinas en febrero de 1966, a pesar de la presunta prohibición total de importar tabaco de dicho país que había regido desde noviembre de 1965. Las exportaciones del Reino Unido a Rhodesia del Sur habían ascendido a 453.000 libras esterlinas en enero de 1966 y a 672.000 libras esterlinas en febrero. El capital extranjero acudía a Rhodesia del Sur a un ritmo creciente, hasta el punto de que la *Overseas Review* de marzo indicaba que la Bolsa de Rhodesia se había mantenido en general en calma, sin que hubieran aparecido tendencias acusadas en el mercado.

476. Esos hechos demostraban claramente la ineficacia de las sanciones y restricciones impuestas a Rhodesia del Sur y desmentían las seguridades dadas por el Primer Ministro del Reino Unido en la Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth*, celebrada en Lagos, de que los efectos acumulados de las sanciones podrían poner fin a la rebelión en varias semanas. Era evidente que el régimen de Smith había aprovechado los últimos cinco meses de inactividad del Gobierno británico para afianzar su posición y reajustar su economía a las nuevas circunstancias. El Ministro interino de Minas y Tierras del Gobierno de Smith había declarado recientemente que se habían encontrado nuevos mercados para los minerales de Rhodesia, en sustitución de los perdidos como resultado de los embargos comerciales. La cosecha de tabaco de Rhodesia se había vendido y la prohibición de vender petróleo a Rhodesia del Sur no estaba dando mejores resultados que otros embargos.

477. El Gobierno del Reino Unido debía hacer frente a sus responsabilidades y adoptar medidas definitivas y decisivas para resolver el problema. La prensa del Reino Unido en general reconocía la necesidad de adoptar medidas severas, enérgicas y amplias para derribar el régimen ilegal de Smith.

478. Polonia apoyaba firmemente la resolución del Consejo de Seguridad de 20 de noviembre de 1965, y las resoluciones aprobadas en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. En los documentos A/6235 y Add.1, y S/7087 y Add.1¹⁴ se expresaba claramente su posición al respecto. Polonia apoyaba firmemente el dere-

¹⁴ *Ibid.*, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966.

cho del pueblo zimbabwe a la independencia y a la libre determinación, de conformidad con los principios establecidos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y estimaba que no se podía negociar sobre los derechos de ese pueblo. Por esa razón, apoyaría toda resolución que tendiese a la rápida eliminación del régimen racista de Smith y al restablecimiento del derecho a la independencia de los 4 millones de personas que componían el pueblo zimbabwe.

479. La representante de Madagascar dijo que las informaciones de la prensa mundial demostraban el fracaso de las sanciones económicas impuestas por el Reino Unido para destruir la autoridad del régimen ilegal de Smith. En lugar de producir una solución aceptable, el tiempo había hecho aún más trágica la situación de los 4 millones de africanos que habitaban en Rhodesia del Sur. Era, por tanto, esencial que el Comité Especial examinase los nuevos acontecimientos ocurridos en Rhodesia del Sur e hiciera las sugerencias oportunas.

480. Las muchas resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General demostraban la gravedad de la situación en Rhodesia del Sur y la resistencia de la Potencia administradora a intervenir de conformidad con los deseos de la gran mayoría de los países. La ilegal y unilateral declaración de independencia de Ian Smith había sido consecuencia lógica de la no intervención del Reino Unido en Rhodesia del Sur, y era justo que el Reino Unido aceptase la responsabilidad por el destino de los habitantes africanos de Rhodesia del Sur. Las declaraciones de intención del Gobierno del Reino Unido habían de ser traducidas ahora en actos.

481. La resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad exhortaba al Gobierno del Reino Unido a adoptar todas las medidas adecuadas para poner fin inmediatamente al régimen minoritario de Rhodesia del Sur y pedía a todos los Estados que rompiesen toda relación económica con dicho país y se abstuvieran de todo acto que ayudase o estimulase al régimen ilegal que existía en él. El Reino Unido y otros países habían impuesto diversas sanciones financieras y económicas a Rhodesia del Sur en cumplimiento de esa resolución, pero las sanciones habían resultado inadecuadas y Rhodesia del Sur había logrado vender su cosecha de tabaco y obtener suministros adecuados de petróleo. La economía de Rhodesia del Sur se encontraba ahora en mejor situación que nunca, gracias a la complicidad criminal del Gobierno de Sudáfrica. Acontecimientos recientes habían subrayado el papel desempeñado por el Gobierno de Portugal para hacer ineficaz el embargo del petróleo, cosa que debía haberse previsto desde el principio, ya que ninguna nación podía esperar que esos dos Gobiernos procediesen de buena fe en este asunto. Pero la responsabilidad que les cabía por hacer ineficaces las sanciones económicas y financieras, no disminuía la responsabilidad que cabía a la Potencia administradora, que no sólo se había comprometido a aplastar la rebelión sino también a adoptar medidas encaminadas a permitir al pueblo de Rhodesia del Sur que decidiese su propio destino sobre la base del sufragio universal. Mientras el Gobierno ilegal de Smith no tuviera nada que temer del Gobierno del Reino Unido, salvo las sanciones económicas, no tendría dificultades en superarlas con la complicidad de los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica. Estaría incluso en posición de hacer sufrir las consecuencias de dichas sanciones a los africanos que habían ido a trabajar a

Rhodesia del Sur, y el pueblo zimbabwe perdería así toda esperanza de lograr que se reconocieran sus derechos.

482. La delegación de Madagascar estaba convencida de que no podría lograr una solución real del problema con medidas parciales como las adoptadas recientemente por el Consejo de Seguridad. La Potencia administradora debía, por consiguiente, tener en cuenta la posibilidad de ir más allá de esas medidas provisionales y adoptar medidas coercitivas en virtud de los Artículos 41 y 42 de la Carta. La delegación de Madagascar apoyaría todo proyecto de resolución conforme a esas líneas.

483. El representante de Venezuela observó que una vez más el Comité Especial se veía obligado a considerar la situación anormal reinante en Rhodesia del Sur. Por su parte, Venezuela había apoyado y había puesto en ejecución las diversas recomendaciones relativas a Rhodesia del Sur aprobadas por la Asamblea General, el Comité Especial y el Consejo de Seguridad. Se había negado a reconocer al gobierno racista de Rhodesia del Sur, había prohibido todo acto que pudiera ayudar o alentar a dicho gobierno a mantenerse en el poder y había prohibido también toda relación con él, incluso las relaciones económicas.

484. En particular, el Gobierno de Venezuela había prohibido el suministro de petróleo o sus derivados con destino a Rhodesia del Sur, mientras subsistiera en él el gobierno de Smith. A este respecto, el orador desmintió categóricamente la alusión hecha por el representante de Ghana (párr. 467, *supra*). Venezuela no poseía barcos para el transporte de petróleo y en ningún caso el Gobierno de Venezuela permitiría la venta de petróleo o sus derivados con destino a Rhodesia del Sur. Sin embargo, en Venezuela operaban varias compañías de petróleo extranjeras, y era evidente que una vez que el petróleo había sido sacado por esas compañías fuera de Venezuela y de las aguas territoriales venezolanas, el Gobierno de Venezuela no tenía ningún control sobre él ni podía ser responsable de la venta que esas compañías hicieran a un comprador determinado. Como sabían los miembros del Comité, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, el tráfico en alta mar era libre, y ningún Estado podía cambiar el rumbo de un barco que estuviera en alta mar, fuera cual fuera su destino declarado o presunto.

485. En su respuesta¹⁵ a la nota del Secretario General relativa a la aplicación de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, el Gobierno de Venezuela insistía en que había apoyado siempre las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, y en que reconocía el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la libre determinación y a la independencia, y había declarado oficialmente que no realizaría ningún acto que pudiera ayudar o alentar al régimen ilegal y minoritario de Rhodesia del Sur, que no realizaría ningún suministro de armas, equipo o material militar y se abstendría de mantener cualesquiera relaciones económicas con dicho gobierno y que se negaría a suministrar petróleo o sus derivados con destino a dicho país, mientras subsistiera en él el referido gobierno.

¹⁵ *Ibid.*, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7253.

486. La mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas habían prometido cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, podía comprobarse, sin lugar a dudas, que las medidas previstas en la resolución habían sido insuficientes y que, por lo tanto, las Naciones Unidas debían pensar en la posibilidad de que fueran aplicadas, de acuerdo con las disposiciones de la Carta, otras medidas más efectivas y apropiadas.

487. En opinión de la delegación de Venezuela, el Comité Especial no debía dejarse desviar de su verdadero objetivo, a saber: la rápida aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a todos los territorios coloniales y, por ende, a Rhodesia del Sur. La delegación de Venezuela había mantenido siempre que el Reino Unido, como Potencia administradora, era responsable en todo lo que concernía al pueblo de Rhodesia del Sur, hasta tanto éste hubiera obtenido su independencia. Ciertamente, la delegación del Reino Unido había proclamado categóricamente como suya tal responsabilidad. Por lo tanto, no se podía admitir que se tratase de desplazar esta responsabilidad a fin de hacerla recaer sobre otros Estados. Era inadmisibles tratar de circunscribir todo el complejo problema de Rhodesia del Sur a hechos aislados, que tenían una importancia marginal, cuando estaba en manos de la Potencia administradora impedir que tales hechos tuvieran resultados efectivos.

488. La obligación de la Potencia administradora era llevar al pueblo todo de Rhodesia del Sur a la libertad y a la independencia, sin distinción alguna basada en la raza o en el color, y permitir, por todos los medios a su alcance, al pueblo de Rhodesia el ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia. Las Naciones Unidas tenían, por su parte, el derecho y la obligación de inducir al Reino Unido a cumplir sus obligaciones para con el pueblo de Zimbabwe. El objetivo del Comité Especial no podía limitarse al simple derrocamiento de una autoridad calificada como ilegal por la Potencia administradora, pues ello equivaldría a reconocer la legalidad de la Constitución de 1961, la cual había sido condenada no sólo por 4 millones de africanos de Rhodesia del Sur, sino también por la Asamblea General. La legalidad residía en la voluntad del pueblo de Rhodesia que aspiraba, a justo título, a recuperar su soberanía.

489. La delegación de Venezuela creía que el método más adecuado para poner término a la situación anormal reinante en Rhodesia del Sur consistía en la aplicación íntegra y sin tardanza de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Mientras no se hubieran aplicado en Rhodesia del Sur los principios contenidos en esa resolución, la situación del pueblo de Zimbabwe no habría cambiado.

490. El representante de Yugoslavia recordó que la cuestión de Rhodesia del Sur había figurado desde hace varios años en el programa del Comité Especial, pero que los acontecimientos habían tomado un aspecto particularmente grave en ese territorio en el curso del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, cuando el régimen racista de Smith había declarado unilateralmente la independencia. A raíz de ello, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad habían aprobado varias resoluciones importantes por las que imponían determinadas obligaciones al Gobierno del Reino Unido y a los de otros Estados, pero de igual modo que en años anteriores, el Gobierno del

Reino Unido había hecho caso omiso de lo que se disponía en dichas resoluciones, a causa de sus especiales intereses en Rhodesia del Sur.

491. El Gobierno del Reino Unido había afirmado que tenía la responsabilidad en cuanto se refería a Rhodesia del Sur y que el régimen de Smith podría ser derribado rápidamente, sin tener que utilizar la fuerza militar, mediante la aplicación de sanciones económicas y, particularmente, de un embargo sobre el petróleo. Sin embargo, los acontecimientos habían desmentido las afirmaciones del Gobierno del Reino Unido, y la delegación de Yugoslavia no veía razón alguna para creer que pudiera llegarse jamás a establecer el imperio del derecho en Rhodesia del Sur por los medios indicados.

492. Las sanciones económicas y el embargo sobre el petróleo habían fracasado totalmente. Las Potencias coloniales se habían esforzado por mantener la unidad de los regímenes racistas y coloniales en la parte meridional de África, ya que todo golpe eficaz al régimen de Smith tendría repercusiones sobre los regímenes colonialistas y racistas de Sudáfrica y de los territorios portugueses. Tanto el Gobierno de Sudáfrica como el de Portugal habían declarado que seguirían manteniendo relaciones normales con el régimen de Smith, y en realidad estaban cooperando íntimamente con él. La delegación de Yugoslavia dudaba de que el Reino Unido estuviera dispuesto a deponer al régimen de Ian Smith mediante sanciones económicas y esas dudas habían demostrado estar bien fundadas. El Reino Unido no sólo no había puesto fin al régimen de Smith, sino que, con su actitud, lo había fortalecido aún más.

493. Era cierto que la existencia del régimen de Smith no dependía del cargamento que pudiera llevarse en uno o dos buques petroleros. La resolución 221 (1966) del Consejo de Seguridad, que se relacionaba con dicho problema, distaba mucho de abarcar los aspectos importantes de la situación de Rhodesia del Sur. El Gobierno del Reino Unido había solicitado y obtenido del Consejo de Seguridad autorización para impedir que buques tanque atracaran en Beira, pero no se había mostrado dispuesto a votar en favor de las enmiendas propuestas por Malí, Nigeria y Uganda¹⁶, que le habrían concedido facultades aún más amplias para impedir la entrada en Rhodesia del Sur de petróleo y de otros artículos. El mismo hecho de que el Gobierno del Reino Unido se hubiera visto obligado a solicitar autorización para usar la fuerza, aunque fuera en escala limitada, indicaba que reconocía que era insostenible su posición inicial en contra del uso de la fuerza. Pero el limitado uso de ésta no daría resultados: únicamente la aplicación de la fuerza en gran escala podría derribar al régimen racista e ilegal de Smith.

494. Yugoslavia había observado con honda preocupación la evolución de los acontecimientos de Rhodesia del Sur. Su posición acerca de este problema había quedado expuesta en dos documentos del Consejo de Seguridad¹⁷. La delegación de Yugoslavia, en conformidad con dicha posición, consideraba que de-

¹⁶ *Ibid.*, documento S/7243.

¹⁷ *Ibid.*, *Vigésimo Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965*, documento S/6942; e *ibid.*, *Vigésimo Primer Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966*, documento S/7143.

bían aplicarse medidas más amplias y decisivas, incluido el uso de la fuerza, para poner término al régimen de Smith, que constituía una amenaza constante para la paz y la seguridad mundiales.

495. El representante del Irak dijo que el Reino Unido había resistido siempre los esfuerzos para plantear la cuestión de Rhodesia del Sur ante las Naciones Unidas, alegando que el territorio era autónomo y que las Naciones Unidas no tenían jurisdicción en el asunto. Se había opuesto a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y había protegido al régimen minoritario de Rhodesia del Sur. El hecho de que ahora se hubiera dirigido a las Naciones Unidas no debía interpretarse como un cambio de política. Al pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad, el Reino Unido había pretendido que deseaba un mandato internacional legal para detener a las naves de las que razonablemente se podía pensar que transportaban petróleo destinado a Rhodesia del Sur. Sin embargo, el Reino Unido ya tenía ese mandato, en virtud de las diversas resoluciones aprobadas, en particular la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, que, entre otras cosas, exhortaba al Reino Unido a establecer un embargo sobre el petróleo. Si el Reino Unido era sincero, resultaba difícil entender por qué había esperado tanto para venir al Consejo de Seguridad, demora que el Sr. Smith había usado para afianzar su régimen. Esta falta de urgencia había caracterizado a la política del Reino Unido desde el principio.

496. El 25 de mayo de 1965, la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* había emitido una declaración relativa a la conclusión de las elecciones en Rhodesia del Sur y a la intención del Gobierno del Reino Unido de explorar todas las posibilidades de negociar un arreglo sobre la cuestión constitucional. En la Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth* celebrada en Londres en junio de 1965, los Primeros Ministros habían pedido al Reino Unido que introdujera legislación para suspender la Constitución de 1961 y que nombrara un gobierno provisional, el cual debía derogar las leyes opresivas y discriminatorias. También se había exhortado al Gobierno del Reino Unido a que preparara el camino para la celebración de elecciones libres, en el caso de una negativa del Sr. Smith, y a que introdujera el gobierno democrático. El Sr. Smith se había negado a cooperar. Tras diversas negociaciones, había advertido al Gobierno del Reino Unido en octubre de 1965, antes de una nueva serie de conversaciones, que si las conversaciones no tenían éxito declararía la independencia unilateralmente. Así lo había hecho efectivamente, el 11 de noviembre de 1965.

497. Frente a esta actitud desafiante, la acción del Gobierno del Reino Unido había sido vacilante e inútil. El Primer Ministro del Reino Unido había asegurado que no se emplearía la fuerza contra el régimen de Rhodesia del Sur. Según *The New York Times*, del 17 de abril de 1966, también había prometido que no bloquearía los puertos de Mozambique y no remitiría la cuestión de Rhodesia a las Naciones Unidas. Por ello, el Sr. Smith había podido llevar adelante sus planes sin oposición. La única reacción del Gobierno del Reino Unido había sido adoptar algunas medidas económicas y financieras y declarar que prestaría la mayor consideración a cualquier petición de ayuda de parte del Gobernador General, petición que al parecer no iba a ser formulada. Lo más que el Reino Unido podía decir era que había instalado un transmisor cerca de

la frontera de Rhodesia del Sur como parte de sus esfuerzos por deponer al régimen de Smith.

498. El 20 de noviembre de 1965, el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución 217 (1965), que exhortaba al Gobierno del Reino Unido a aplastar la rebelión y a tomar medidas inmediatas para permitir al pueblo de Rhodesia del Sur determinar su propio porvenir. Habían pasado cinco meses y no había indicio alguno de que la rebelión hubiera sido aplastada. Al referirse a las sanciones económicas, el Primer Ministro del Reino Unido había dicho que se necesitarían unas pocas semanas para hacerle recuperar el juicio al Sr. Smith. Sin embargo, las sanciones económicas no habían tenido éxito, pues, habían sido rechazadas por algunos Estados Miembros y pasadas por alto o interpretadas a voluntad por otros. Por lo que se refería a la resolución 221 (1966) del Consejo de Seguridad relativa a los barcos petroleros, se decía en fuentes fidedignas que Rhodesia del Sur podía prescindir del petróleo que recibía por ese medio, debido principalmente a la ayuda de Sudáfrica. Los Gobiernos de Sudáfrica y Portugal habían indicado claramente que no cumplirían las resoluciones del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General. Ambos seguían manteniendo buenas relaciones con el régimen minoritario de Rhodesia del Sur.

499. En tales circunstancias, era indispensable que se adoptaran nuevas y radicales medidas para resolver el problema de una vez por todas. Ahora había que emplear la fuerza para derrocar al régimen del Sr. Smith y llevar la libre determinación y la democracia a Rhodesia del Sur. Debían tomarse medidas eficaces para impedir que Sudáfrica, Portugal y otros ayudasen al régimen. El Consejo de Seguridad debía estudiar nuevamente la cuestión de Rhodesia del Sur, y en particular la cuestión de si había llegado el momento de invocar el Capítulo VII de la Carta relativo al uso de la fuerza y las sanciones obligatorias. A juicio de la delegación del Irak, debía invocarse ese Capítulo. Finalmente, se debía convencer al Gobierno del Reino Unido de que sólo medidas energéticas, incluso el uso de la fuerza, podían ser apropiadas para resolver la situación. Dicho Gobierno contaba con la autorización y el poder para tomar tales medidas y no tenía ya ninguna excusa para dejar de hacerlo. Era preciso que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad demostrasen al pueblo de Rhodesia del Sur que su confianza en las Naciones Unidas estaba justificada.

500. El representante de Chile dijo que la grave situación en Rhodesia del Sur merecía la más seria atención de las Naciones Unidas. Esta situación se había agravado constantemente en los tres últimos años, durante los cuales el Comité y la Asamblea General habían aprobado varias resoluciones en las que se señalaban a la Potencia administradora los peligros inherentes a la situación y se la exhortaba a abrogar la Constitución de 1961 y otras leyes discriminatorias y a poner en práctica el principio de "un hombre, un voto". El Reino Unido se había abstenido de aplicar esas resoluciones invocando razones constitucionales. Si hubiera hecho un esfuerzo por aplicarlas, no tendría que enfrentar ahora la rebelión del régimen de Smith y la responsabilidad de ponerle término. Sea como fuere, una vez producida la rebelión, el respeto de la ley no podía ya invocarse como justificación para no asegurar el respeto de la justicia y los derechos humanos. No había ningún pretexto que pudiera justificar el

mantener la Constitución discriminatoria de 1961. Además, mientras ella no fuera derogada, subsistiría el peligro de que bajo un disfraz legalista se restableciera el mecanismo de dicha Constitución entregando su aplicación a un gobierno autónomo de Rhodesia del Sur.

501. Por consiguiente, la delegación de Chile estimaba que los cinco principios de la declaración del Reino Unido del 9 de octubre de 1965, juntamente con el sexto principio mencionado en la declaración del Primer Ministro del 25 de enero de 1966, no satisfacían adecuadamente los deseos de las Naciones Unidas sino que más bien limitaban el cambio verdadero que un gobierno interino podría introducir en el Territorio. El poder para revocar o enmendar la Constitución de 1961 había sido adquirido claramente por el Gobierno del Reino Unido de acuerdo con la *Southern Rhodesia Act* de 1965, y este Gobierno debía hacer uso de él.

502. En lo que se refería a la acción tomada para sofocar la revuelta, la delegación de Chile deseaba exponer lo siguiente: en primer lugar, el Gobierno chileno apoyaba las resoluciones 202 (1965), 216 (1965), 217 (1965) y 221 (1966) del Consejo de Seguridad y las resoluciones 2021 (XX) y 2022 (XX) de la Asamblea General, y había adoptado las disposiciones administrativas necesarias para aplicar las medidas tomadas contra el régimen de Smith. En segundo lugar, comprobaba que hasta ahora las sanciones adoptadas por el Reino Unido no habían logrado su objetivo de derrocar al régimen. En tercer lugar, la información de la prensa y de otras fuentes indicaba que algunos países se habían negado a cooperar en las medidas de bloqueo económico, y particularmente en las de embargo petrolero. Esto los transformaba en cómplices de la minoría racista de Rhodesia del Sur y la continuación de esta política de desafío a las Naciones Unidas podía acarrear resultados graves para ellos. En cuarto lugar, para el Gobierno chileno aparecía justificada la aplicación del Capítulo VII de la Carta por el Consejo de Seguridad, ya que la situación se había vuelto una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y las medidas de orden voluntario no habían logrado resultado. La resolución 221 (1966) del Consejo sobre los barcos petroleros era útil pero limitada. El mecanismo del Capítulo VII de la Carta debía ponerse en acción para decidir medidas generales y obligatorias que hicieran caer al régimen rebelde. Estas medidas mostrarían también cuáles países negaban a las Naciones Unidas una cooperación a la que estaban legalmente obligados. En muchos respectos, el resultado de la cuestión de Rhodesia del Sur determinaría si las Naciones Unidas eran capaces de establecer un código de conducta mundial o si caerían gradualmente en la impotencia como la Sociedad de las Naciones después del fracaso de sus sanciones en el problema de Etiopía.

503. El representante de Afganistán expresó su aprecio por las declaraciones hechas por algunos miembros del Comité y por el interés manifestado por algunas delegaciones como las de Argelia y Ghana, que no eran miembros del Comité. Citó algunos pasajes de un número reciente de *The Manchester Guardian Weekly* en el sentido de que nadie podía ser neutral en la cuestión de Rhodesia del Sur, que el Reino Unido había conservado el derecho de actuar solo y que el pueblo de África esperaba que lo hiciera. Esto reflejaba la opinión pública del Reino Unido. El Comité conocía también la opinión pública en todo el mundo, que soste-

nía en general que las medidas adoptadas hasta ahora por el Reino Unido eran inadecuadas.

504. La delegación del Afganistán consideraba que se necesitaba una acción más eficaz y lamentó que el Reino Unido no fuera a presentar propuestas en ese sentido. Según la Carta y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, el pueblo de Rhodesia del Sur tenía un derecho inalienable a la libertad y la independencia. El Reino Unido no había tomado ninguna medida para garantizar ese derecho y la situación constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por consiguiente, la delegación afgana estaba en favor de que el Comité recomendase al Consejo de Seguridad que considerase las medidas adicionales previstas en el Capítulo VII de la Carta y que pusiese en práctica sus decisiones relativas a Rhodesia del Sur.

505. El representante de Arabia Saudita, haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, dijo que era anómalo que las Naciones Unidas considerasen la situación de un país que era todavía una colonia y del cual el Reino Unido era principal responsable. Prefería atribuir esa situación a las dificultades con que tropezaba el Reino Unido en el Territorio de que se trataba, y no a la aplicación por esa Potencia de criterios diferentes para los territorios habitados por razas blancas y los habitados por razas de color. Sin embargo, lo cierto era que el Reino Unido no estaba tomando medidas eficaces para poner término a la situación en Rhodesia del Sur.

506. Esta renuencia del Gobierno del Reino Unido a hacer uso de la fuerza en Rhodesia del Sur era comprensible; los británicos no querían que se emplease la fuerza o se impusiesen ciertas medidas contra la gente de su propia sangre que se encuentra en ese Territorio. Las medidas que el Reino Unido había tomado hasta ahora tenían la forma de un boicoteo. Pero un boicoteo no podía ser eficaz debido a la vasta zona que abarcaban Rhodesia del Sur, Mozambique y Sudáfrica, aunque se estableciera un costoso mecanismo de supervisión. Siempre habría contrabandistas que harían llegar a un destino los artículos prohibidos.

507. De nada serviría la aprobación de resoluciones que no se aplicarían; había llegado el momento de poner a los 4 millones de africanos de Rhodesia del Sur en condiciones de ejercer su derecho a la libre determinación. Se decía que este no era el momento oportuno para adoptar medidas, porque no había disturbios en Rhodesia del Sur; pero un pueblo oprimido no podía crear perturbaciones en un estado policial. Si el Reino Unido no quería actuar, debía pedir a las Naciones Unidas que convirtieran a Rhodesia del Sur en un territorio en fideicomiso y que asumieran la responsabilidad del mismo. Además, había ciertas medidas eficaces que podían tomarse.

508. Debía efectuarse una operación colectiva por la que aviones que volaran a gran altura bombardearían a Rhodesia del Sur, no con bombas, sino con volantes educativos dirigidos tanto a la población blanca como a la población de color. Los volantes harían un llamamiento a la conciencia de los blancos, no todos los cuales estaban del lado del Sr. Smith, e instarían a los africanos a defender sus derechos. Sin duda, varios gobiernos estarían dispuestos a contribuir a una operación semejante. Además, podría haber emisiones radiofónicas regulares dirigidas a la población de Rhodesia del Sur; las Naciones Unidas podrían destinar

fondos para este fin. Otra medida eficaz sería que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se negasen a conceder visados de entrada o de tránsito a los ciudadanos blancos de Rhodesia del Sur. Estos se sentirían así aprisionados en su propio país, lo que tendría gran impacto psicológico.

509. Estos medios pacíficos deberían emplearse por un período de prueba de seis meses o un año. Si fracasaran, habría que adoptar otras medidas prácticas y pragmáticas, como en el caso del Congo. La Unión Soviética y los Estados Unidos — siendo las dos Potencias mundiales con la mayor autoridad y los recursos financieros más amplios — deberían desempeñar conjuntamente el papel principal, como parte de su acercamiento actual. No obstante, los Estados asiáticos, estaban igualmente preocupados por la situación de Rhodesia del Sur y tenían una responsabilidad con respecto a todos los habitantes de ese Territorio.

510. El representante de Bulgaria hizo referencia a un cablegrama dirigido por la República Democrática Alemana que el Presidente había puesto a disposición de los miembros del Comité. Declaró que en el cable figuraba una comunicación importante en la cual el Gobierno de la República Democrática Alemana expresaba su apoyo a la lucha del pueblo de Rhodesia del Sur por la liberación. Del texto del cablegrama se deducía claramente que la política de la República Democrática Alemana para con Rhodesia del Sur se basaba en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

511. Era de lamentar que la delegación del Reino Unido no hubiera explicado todavía al Comité Especial qué medidas se proponía adoptar su Gobierno para derribar el régimen racista de Ian Smith. Con esa extraña actitud la delegación del Reino Unido estaba tratando quizás de dar la impresión de que todo examen de la cuestión de Rhodesia que se realizara en ese momento sería inapropiado y superfluo, y que lo lógico sería esperar los resultados de la reciente resolución del Consejo de Seguridad. La delegación búlgara no compartía esa opinión. Consideraba, al igual que la mayoría de las delegaciones, que la reciente sesión del Consejo de Seguridad, convocada con grandes prisas por iniciativa de la delegación del Reino Unido, no había contribuido a que se comprendiese mejor el problema de Rhodesia del Sur ni a una solución del mismo. Durante los debates del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión celebrados en noviembre de 1965 y abril de 1966, los representantes del Reino Unido habían hecho hincapié en que la responsabilidad por el problema de Rhodesia del Sur recaía sobre el Reino Unido y en que sólo a ese Gobierno correspondía adoptar las medidas necesarias. La delegación búlgara estaba plenamente de acuerdo con esa declaración. Más aún, la situación actual en Rhodesia del Sur era resultado de la política seguida por el Reino Unido. El Reino Unido era responsable de que la minoría blanca de Rhodesia del Sur hubiera podido establecer un régimen racista contra la voluntad del pueblo. Su delegación también estaba de acuerdo en que el Gobierno del Reino Unido era el que debía tomar todas las medidas necesarias para poner fin al régimen racista lo antes posible.

512. De las declaraciones hechas en el Comité se desprendía claramente que la abrumadora mayoría de los miembros estaba convencida de que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno del Reino

Unido eran ineficaces y no bastarían para provocar la caída del régimen racista de Smith. Parecía haber acuerdo general en que la finalidad perseguida por el Gobierno del Reino Unido al llevar precipitadamente la cuestión ante el Consejo de Seguridad inmediatamente después de su victoria en las elecciones generales, había sido dar a la opinión mundial la impresión de que había decidido tomar medidas concretas, cuando lo cierto era que las medidas recomendadas en su proyecto de resolución en nada podían ayudar a conseguir el objetivo perseguido por anteriores resoluciones y por la gran mayoría de los Estados Miembros, o sea, suprimir de una vez por todas el régimen de la minoría racista y establecer un gobierno de la mayoría en Rhodesia del Sur.

513. El representante del Uruguay dijo que había acuerdo general en que la declaración unilateral de independencia y el régimen minoritario de Rhodesia del Sur no debían ser reconocidos y en que al Reino Unido le cabía la responsabilidad primordial en todo el proceso institucional de Rhodesia del Sur. Sin embargo, Uruguay no podía convenir en que el Reino Unido tuviese la responsabilidad exclusiva de esta cuestión. La Potencia administradora tenía ante las Naciones Unidas la responsabilidad de llevar a Rhodesia del Sur a la independencia, de acuerdo con el Capítulo XI de la Carta y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, traspasando todos los poderes y atributos de la soberanía a un gobierno representativo, libremente elegido por la población. La competencia de las Naciones Unidas y la responsabilidad del Reino Unido habían sido, por otra parte, claramente definidas por la Asamblea General al decidir en la resolución 1747 (XVI) que Rhodesia del Sur era un territorio no autónomo. La delegación del Uruguay había dejado sentada su posición sobre esta cuestión en la Cuarta Comisión en el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General¹⁸.

514. El Reino Unido, por consiguiente, tenía la facultad y la obligación de emplear todos los medios a su alcance para llevar al pueblo de Rhodesia del Sur a la independencia, a través de un proceso de genuina autodeterminación. Como primer paso, tenía que derrocar al régimen minoritario que actualmente estaba en el poder. En su resolución de 20 de noviembre de 1965, el Consejo de Seguridad había exhortado al Gobierno del Reino Unido a que aplastara la rebelión y adoptara todas las demás medidas apropiadas a tal fin. Sin embargo, no se había dado al Reino Unido carta blanca ni se le había autorizado tampoco a tomar cierta clase de medidas. Uruguay aprobaba la decisión del Reino Unido de solicitar la autorización del Consejo de Seguridad para interceptar a los petroleros con rumbo a Beira.

515. Ante la falta de resultados de las medidas adoptadas hasta ahora y por la responsabilidad de las Naciones Unidas en esta cuestión, muchos Estados Miembros se habían visto llevados a asumir responsabilidades que les habían sido impuestas por la Carta y por la solidaridad internacional, en una situación en la que no les cabía ninguna culpa. La acción internacional resultaría eficaz siempre que las grandes Potencias que tenían la fuerza y los medios necesarios estuvieran dispuestos a encontrar una solución efectiva al problema.

¹⁸ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo período de sesiones, Cuarta Comisión*, vol. I, 1440a. sesión, párrs. 15 a 27.

516. Existía un acuerdo casi general en que las medidas de carácter práctico que las Naciones Unidas debían adoptar estaban dentro del ámbito de la competencia del Consejo de Seguridad; este hecho se había puesto de manifiesto tanto en las resoluciones recientes de la Asamblea General como en el proyecto de resolución que el Comité tenía ante sí. En el párrafo 13 de la resolución 2022 (XX), la Asamblea General señaló que la situación en Rhodesia del Sur constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En la resolución 217 de 20 de noviembre de 1965 el Consejo de Seguridad declaró, en una fórmula extraordinaria, que la situación era extremadamente grave y que su continuación por más tiempo constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En la resolución 221 de 9 de abril de 1966, el Consejo de Seguridad determinó, para el caso muy concreto y limitado de que se trataba, que la situación así provocada constituía una amenaza a la paz. La determinación por el Consejo de Seguridad de que una situación constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales era lo que hacía aplicable el Capítulo VII de la Carta y abría la puerta a las medidas coercitivas. Hasta el momento, el Consejo de Seguridad no había determinado que la situación de Rhodesia del Sur en general constituyese una amenaza a la paz y seguridad internacionales, pero ya había dado dos pasos en ese sentido.

517. El Consejo de Seguridad tendría, pues, que determinar el carácter de la cuestión y decidir sobre las consecuencias de esa determinación, que serían la posible aplicación obligatoria de las medidas previstas en los Artículos 41 y 42 de la Carta. Esa sería una decisión compleja, incluso en lo que se refería a medidas que no involucrasen el uso de la fuerza y más aún cuando se trate del uso de la fuerza. Desgraciadamente, el mecanismo previsto en el Artículo 43 para el uso de la fuerza no había sido creado, ya que las fuerzas necesarias no se habían constituido. La aplicación de las medidas de fuerza dependía del suministro de fuerzas armadas en cada caso por uno o más Estados, por lo que se perdía así el efecto automático, coercitivo e irresistible que la Carta preveía.

518. El representante del Irán dijo que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas la situación en Rhodesia del Sur había empeorado hasta el punto de haber adquirido ya otro carácter. Al principio el Comité había tratado la cuestión de Rhodesia del Sur como cualquier otro problema colonial, condenando la continua subyugación del pueblo zimbabwe bajo el yugo opresor del régimen de la minoría racista y pidiendo que se celebraran conferencias constitucionales y se recurriera a otros medios pacíficos para conseguir la libertad y la independencia de esos pueblos. Ahora la situación había cambiado. Ya no se trataba meramente de un problema colonial sino de una amenaza real a la paz y a la seguridad internacionales, según había determinado el Consejo de Seguridad. En vista de esa conclusión, el Comité no tenía otra opción que poner en marcha los procedimientos de acción establecidos en el Capítulo VII de la Carta. No podía seguir confiando en la buena voluntad de ninguna autoridad determinada; debía tomar medidas compulsivas puesto que estaba en juego el porvenir de las Naciones Unidas mismas.

519. Habían pasado más de cinco meses desde que el Sr. Smith, desafiando al Reino Unido, a las Naciones Unidas y a la opinión mundial, había declarado

unilateralmente la independencia con la confesada intención de perpetuar el régimen usurpador blanco y su dominación sobre el pueblo zimbabwe. Habían pasado tres meses desde que el Primer Ministro había dicho que las sanciones económicas terminarían con el régimen rebelde en cuestión de semanas. Se reconocía ahora generalmente que esas sanciones no habían logrado alcanzar su objetivo.

520. Irán había sido el primer país que respondió al llamamiento del Consejo de Seguridad del 20 de noviembre de 1965 prohibiendo la venta de petróleo a Rhodesia del Sur. Podía apreciarse la importancia de esa medida si se tenía en cuenta que Irán era el mayor exportador de petróleo al Territorio. Irán no había hecho una declaración análoga con respecto a la prohibición de enviar armas puesto que nunca había enviado ni pensado en enviar arma alguna a Rhodesia del Sur. Se habían restringido las relaciones económicas que se mantenían con el Territorio. Con esas medidas Irán no se limitaba a responder a las recomendaciones del Consejo de Seguridad sino que demostraba su infatigable apoyo a la causa de la independencia y a la libertad del pueblo de Zimbabwe.

521. La experiencia de los últimos meses había demostrado la necesidad de adoptar medidas eficaces y de que el Consejo de Seguridad estudiase la adopción de las demás medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta. Aunque lo que había hecho el Reino Unido hasta la fecha había sido inadecuado, era de esperar que adoptase ahora la clase de medidas que se necesitan para producir la caída del régimen de Smith.

522. Según noticias recibidas, el pueblo de Zimbabwe estaba llevando a cabo demostraciones esporádicas contra el régimen de Smith en diversas ciudades de Rhodesia del Sur. Aunque por ahora sólo estaban armados con piedras, podía llegar el momento en que se organizaran y se armen con balas. Su delegación confiaba sinceramente en que el Reino Unido respondería positivamente al llamamiento afroasiático y tomaría medidas eficaces antes que el territorio entero quede hundido en un baño de sangre.

523. El representante de Italia dijo que el debate en el Comité Especial había tenido la ventaja de dar a varios miembros que no formaban parte del Consejo de Seguridad la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la situación en Rhodesia del Sur.

524. La delegación italiana había condenado siempre la tentativa del Sr. Smith y sus colegas de establecer en Rhodesia del Sur un régimen basado en el gobierno de la minoría y en la discriminación racial. Le preocupaba la suerte de los millones de africanos de Rhodesia del Sur a los cuales, a pesar de las muchas resoluciones de las Naciones Unidas, se les seguía negando el derecho a hacerse oír cuando se trataba de determinar el futuro de su país.

525. Su delegación creía que la actitud de las Naciones Unidas frente a la cuestión de Rhodesia del Sur había de ser firme y prudente a la vez: firme al establecer los principios y objetivos y prudente al obrar poniendo en práctica las políticas que se habían adoptado. En conjunto, las medidas tomadas hasta la fecha por los diversos órganos de las Naciones Unidas y más recientemente por el Consejo de Seguridad — sobre el cual recaía en último término la responsabilidad — habían estado de acuerdo con ese criterio.

526. El Gobierno italiano había apoyado plenamente las decisiones del Consejo de Seguridad sobre Rho-

desia del Sur y había hecho todo lo posible por ponerlas en práctica. Además de las medidas descritas en los documentos S/7016 y S/7048¹⁹, el Gobierno italiano había decidido recientemente que todas las importaciones procedentes de Rhodesia del Sur requerirían un permiso especial, medida que venía a complementar la proscripción total de todas las importaciones de azúcar y tabaco procedentes de dicho país impuesta previamente, y había suspendido y rescindido los seguros de todas clases proporcionados por los órganos del Gobierno en relación con las exportaciones a Rhodesia del Sur. Ya en diciembre de 1965 el Gobierno italiano había decretado que quedaba absolutamente prohibido exportar petróleo y productos de petróleo a ese Territorio.

527. El Gobierno italiano lamentaba que no todos los Miembros hubieran aplicado plenamente las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad y esperaba que los países que no lo habían hecho se dieran cuenta de que su verdadero interés exigía que cooperasen con las Naciones Unidas para restablecer el imperio del derecho en Rhodesia del Sur.

528. El tema central del debate era si las medidas aprobadas hasta ahora por el Consejo de Seguridad eran adecuadas para derribar al régimen de Smith. Aunque ese régimen estaba todavía en el poder, se había informado que las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad y llevadas a la práctica por la inmensa mayoría de los Estados Miembros, habían debilitado seriamente la economía del Territorio. Tal vez no estuviera lejos el día en que las autoridades ilegales de Salisbury entraran en razón. Aunque su delegación compartía los sentimientos de impaciencia expresados, consideraba que debía pasar cierto tiempo antes que se pudiera hacer un juicio bien fundado sobre la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha. El sentido común y el espíritu de la Carta sugerían que el objetivo universalmente perseguido se había de alcanzar, en primer lugar, por los medios menos destructivos. En un mundo donde la interdependencia era cada vez mayor, no se debía tomar medida alguna en una región sin haber tenido en cuenta las posibles consecuencias en otras partes.

529. El representante de la Costa de Marfil dijo que desde 1960 el Comité Especial, la Asamblea General y hasta el Consejo de Seguridad habían adoptado muchas resoluciones sobre el problema de Rhodesia del Sur. Eran tantos los acontecimientos que se habían producido en la situación que al parecer no existía ya un desacuerdo profundo sobre el tema. Había usado la expresión "al parecer" deliberadamente, porque muchas delegaciones que se habían unido cuando se trataba de aprobar decisiones importantes contra el actual régimen de Rhodesia del Sur, no habían vacilado en reconocer la legitimidad de la lucha del pueblo de Zimbabue contra quienes defendían la discriminación y los enemigos de la democracia.

530. Las demandas del desdichado pueblo de Zimbabue eran tan justas que hasta el Reino Unido, en un loable esfuerzo de comprensión, había tomado dos veces la iniciativa de pedir una reunión del Consejo de Seguridad para considerar la cuestión de Rhodesia del Sur.

531. No sólo estaba en juego el destino de un remoto país africano sino el futuro de las Naciones Uni-

das mismas. Tal vez por esa razón, más que por compasión, la delegación de la Costa de Marfil había luchado incesantemente para lograr que se restableciera la justicia en Rhodesia del Sur y condenaba inequívocamente a todos los países que estaban tratando de anular la presión que se estaba haciendo sentir al régimen ilegal de Rhodesia del Sur.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

Consenso adoptado por el Comité Especial en relación con los recientes acontecimientos

532. En su 401a. sesión, celebrada el 6 de abril de 1966, el Comité Especial convino en adoptar como consenso la declaración hecha por el Presidente en dicha sesión (véanse párrs. 340 a 345, *supra*) en la inteligencia de que las reservas expresadas por algunos miembros constarían en el acta de la sesión. En su declaración el Presidente señaló a la atención del Secretario General el aterrador orden de cosas existente en Rhodesia del Sur y le pidió que alertara al Presidente del Consejo de Seguridad para que tomara medidas tendientes a someter la situación a la consideración del Consejo, a los efectos de las medidas necesarias en virtud de los Artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas. Los representantes del Reino Unido, los Estados Unidos, Dinamarca, Italia, Australia, Uruguay, Chile y Venezuela expresaron reservas con respecto a la declaración del Presidente (véanse párrs. 379 a 489, *supra*).

Adopción de una resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur

533. En la 405a. sesión, Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Venezuela y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución (A/AC.109/L.272 y Add.1). Posteriormente Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia presentaron una versión revisada de este proyecto de resolución (A/AC.109/L.272/Rev.1).

534. Al presentar el proyecto de resolución revisado, copatrocinado por 13 Potencias (A/AC.109/L.272/Rev.1), el representante de Siria dijo que el proyecto de resolución reflejaba los tres hechos que habían surgido del debate general realizado en el Comité.

535. En primer lugar, la situación seguía siendo grave y tenía consecuencias internacionales de gran trascendencia; el problema de Rhodesia del Sur era arduo y peligroso y estaba conmoviendo la conciencia de la humanidad. En segundo lugar, el Gobierno del Reino Unido no había respondido a la situación. Su presentación reciente al Consejo de Seguridad, dudosa y ambigua, solicitando un mandato parcial para hacer cumplir un embargo sobre el petróleo, constituía una prueba más de que una situación por la que el Reino Unido era exclusivamente responsable había sido manejada con deliberada torpeza. En tercer lugar, necesitaban urgentemente medidas más eficaces para tratar esa situación que estaba empeorando, a fin de defender los principios de la Carta y aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas.

¹⁹ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965.*

536. El párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución reflejaba una doble polaridad en el problema de Rhodesia del Sur; por una parte había una mayoría de cuatro millones de africanos con un derecho inalienable a la libertad y a la independencia y, por otra parte, una minoría tiránica de colonos europeos blancos que hacían caso omiso totalmente de ese derecho. El párrafo reafirmaba, pues, los derechos inalienables del pueblo de Rhodesia del Sur y reconocía la legitimidad de su lucha por obtener el goce de esos derechos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El párrafo 2 de la parte dispositiva recordaba la resolución 2022 (XX) por la que la Asamblea General había condenado las políticas de discriminación y segregación racial practicadas en Rhodesia del Sur como crimen de lesa humanidad. Tal crimen exigía que se hiciera algo. El párrafo 3 de la parte dispositiva condenaba, por consiguiente, la falta de aplicación por ciertos Estados de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, el Comité Especial y el Consejo de Seguridad. El párrafo 4 de la parte dispositiva exhortaba a la Potencia administradora a adoptar todas las medidas eficaces, incluso el uso de la fuerza. Dicha Potencia no podía oponerse al empleo de la fuerza, ya que la había usado en otras circunstancias, por ejemplo en Adén. Como, según se decía en el párrafo 5 de la parte dispositiva, la explosiva situación existente en Rhodesia del Sur seguía constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, debían buscarse medidas adecuadas para poner remedio a esa situación, y el Consejo de Seguridad debía considerar la posibilidad de adoptar medidas en virtud del Capítulo VII de la Carta, según se recomendaba en el párrafo 6 de la parte dispositiva.

537. Básicamente, el proyecto de resolución invocaba la autoridad de la Carta para actuar en relación con una situación humana. En esa forma ponía en práctica las estipulaciones y disposiciones de la Carta a fin de que resultasen obligatorias para los Estados Miembros. Al aprobar el proyecto de resolución, el Comité compartiría con el pueblo de Zimbabwe el peso de su tragedia y el sufrimiento de su humillación.

538. El representante de Sierra Leona dijo que los patrocinadores del proyecto de resolución consideraban llegado el momento de que el Gobierno del Reino Unido actuase resueltamente y de que las Naciones Unidas adoptasen una decisión firme. El Reino Unido había llegado a convencerse de que las sanciones solas no podían aplastar la rebelión y por eso había pedido al Consejo de Seguridad que autorizara el empleo de la fuerza para interceptar a los petroleros. Si el Reino Unido podía emplear la fuerza para impedir que los petroleros descargasen en Beira, podía usar la fuerza para detener los abastecimientos de petróleo procedentes de otras partes y para aplastar la rebelión propiamente dicha en Rhodesia del Sur. Se sabía que el bloqueo económico había fracasado por completo; el proyecto de resolución condenaba a ciertos Estados, y especialmente a Sudáfrica y Portugal, por no haber aplicado las resoluciones correspondientes y por haber dado apoyo y ayuda al régimen de la minoría racista.

539. El objetivo que perseguía el proyecto de resolución era poner fin rápidamente a la tragedia de Rhodesia del Sur. Sugirió, por lo tanto, que el Gobierno del Reino Unido y las Naciones Unidas procedieran inmediatamente a adoptar las medidas necesarias para

poner fin a las políticas de discriminación y segregación raciales practicadas en dicho Territorio, para establecer inmediatamente un régimen de derecho y para permitir que la población de Rhodesia del Sur disfrutase de sus derechos. El orador tenía la seguridad de que todos los verdaderos amigos de la mayoría del pueblo de Rhodesia del Sur apoyarían el proyecto de resolución, que sólo pedía la expulsión de la minoría racista y que el país fuera gobernado por el pueblo que constituía realmente la mayoría.

540. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que las sanciones contra el régimen de Salisbury carecían de significado real para el pueblo africano que estaba siendo explotado despiadadamente por ese régimen. Por esa razón el proyecto de resolución subrayaba la necesidad de adoptar medidas concretas y eficaces para derrocar el régimen de Smith. Las cifras publicadas permitían comprobar que, a pesar de las sanciones, el comercio entre el Gobierno del Reino Unido y Rhodesia del Sur estaba aumentando en vez de disminuir. Los Estados Unidos continuaban su comercio de tabaco con Rhodesia del Sur. Rhodesia del Sur estaba recibiendo grandes cantidades de petróleo de Sudáfrica. El fracaso de las sanciones demostraba que la única forma de aplastar el régimen de Smith era recurrir a la fuerza. Esto era lo que se subrayaba en el proyecto de resolución, cuya adopción recomendaba el orador al Comité.

541. El debate había revelado muchos hechos que ponían aún más en evidencia la naturaleza despiadada del sistema colonial. La cuestión de Rhodesia del Sur no presentaría mayores problemas si las grandes Potencias estuvieran dispuestas a proceder eficazmente en favor de la libertad y la independencia para ese país. Una y otra vez se había dicho a las delegaciones que no se impacientaran y dieran tiempo para que obraran las medidas más débiles. La delegación de Tanzania opinaba que el tiempo era algo que mucho necesitaba el régimen de la minoría racista en Rhodesia para consolidar su ilegal y criminal posición. Las delegaciones africanas pedían a todos sus amigos que secundasen sus esfuerzos para lograr la adopción de medidas efectivas — con lo que querían decir el uso de la fuerza — para eliminar el régimen minoritario.

542. Ya era hora de que se recurriera a la fuerza para lograr justicia y dar a la población de Rhodesia su inalienable derecho a la libertad y la independencia. Se había sostenido en el Comité que los miembros debían tener cuidado al hablar del uso de la fuerza. Era por lo tanto irónico que en el Consejo de Seguridad fuera el Reino Unido el que planteara la cuestión del uso de la fuerza en cierta medida. El orador se preguntaba por qué se proponían esas medidas a medias. El Reino Unido fue el que permitió al régimen de Smith acumular las armas modernas que estaba empleando contra el pueblo africano. La prensa había publicado informaciones sobre choques con las fuerzas de Smith en Salisbury y sobre los actos brutales cometidos contra el pueblo africano. Habían transcurrido cinco meses desde que Smith había asumido el poder en Rhodesia. Como africanos y como miembros de la sociedad humana, el pueblo de Tanzania no podía estar de acuerdo en que se esperara mientras se estaban sacrificando vidas humanas. Le había complacido ver que el proyecto de resolución había recibido el apoyo de una gran Potencia y esperaba que otras seguirían ese ejemplo.

543. El representante de Bulgaria dijo que el moderado y bien equilibrado proyecto de resolución (A/AC.109/L.272/Rev.1) presentado por varios países reflejaba el hecho de que las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno del Reino Unido habían resultado ineficaces e inadecuadas y recomendaba simplemente al Consejo de Seguridad que estudiase la adopción de las demás medidas para poner en práctica sus decisiones relativas a Rhodesia del Sur. El contenido mismo del proyecto de resolución indicaba que el debate sobre la cuestión en el Comité Especial no era más que una etapa en el camino hacia un debate más completo en el Consejo de Seguridad con miras a determinar qué se había de hacer para poner remedio a la grave situación que existía en Rhodesia del Sur.

544. La delegación búlgara consideraba que el Comité, y en particular los miembros que por su situación geográfica y sus lazos fraternales con Rhodesia del Sur se sentían más directamente afectados por la cuestión, debían abrir el camino para un examen cuidadoso del problema en el Consejo de Seguridad que permitiese al Consejo adoptar medidas para suprimir al régimen de la minoría blanca racista en ese país lo antes posible y asegurar el establecimiento de un gobierno de la mayoría.

545. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó la satisfacción de su delegación al ver que el proyecto de resolución revisado (A/AC.109/L.272/Rev.1) reflejaba las opiniones y propuestas expuestas durante el debate general con más exactitud que el texto original. El párrafo 3 de la parte dispositiva, por ejemplo, no se limitaba a condenar en general a los Estados que apoyaban y prestaban asistencia al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur sino que condenaba concretamente a los racistas de Sudáfrica y a los colonialistas portugueses que con su proceder criminal estaban anulando los esfuerzos de los países que trataban de poner en práctica las decisiones correspondientes de las Naciones Unidas. La nueva redacción de este párrafo representaba una mejora considerable y la delegación soviética estaba dispuesta a apoyarlo, aunque consideraba que hacía ya mucho tiempo que el Comité debería haber condenado abierta y resueltamente a todos aquellos que, directa o indirectamente, habían obstaculizado la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, en particular la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad.

546. El nuevo párrafo 4 de la parte dispositiva representaba también una gran mejora en cuanto subrayaba que la responsabilidad de liquidar el régimen racista de Rhodesia del Sur recaía plenamente sobre la Potencia administradora e implicaba que se debía transferir el poder al pueblo de conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y con la Carta de las Naciones Unidas.

547. La delegación de la Unión Soviética, lo mismo que muchas otras delegaciones, consideraba que lo que había hecho el Reino Unido al pedir que se convocase al Consejo de Seguridad era simplemente tratar de exonerar al Gobierno del Reino Unido de la responsabilidad que le correspondía por no haber puesto en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas y por el empeoramiento de la situación de Rhodesia del Sur. Su delegación también consideraba que la deci-

sión aprobada por el Consejo de Seguridad el 9 de abril de 1966 era una medida manifiestamente inadecuada porque no proporcionaba una solución acertada del problema de Rhodesia.

548. Su delegación era partidaria de que se adoptaran decisiones que previesen la adopción de mayor número de medidas destinadas a llevar a la práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Rhodesia del Sur, incluso la aplicación de sanciones en virtud del Capítulo VII de la Carta. El párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución estaba, pues, perfectamente justificado; respondía a las exigencias de la situación y estaba de acuerdo con los deseos de la mayoría de las delegaciones. Aunque consideraba inadecuados algunos de los párrafos del preámbulo, su delegación votaría a favor del proyecto de resolución en conjunto.

549. El Gobierno de la Unión Soviética había apoyado y continuaba apoyando la lucha de los pueblos por la libre determinación, la libertad y la independencia. La Unión Soviética respaldaba firmemente al pueblo de Zimbabwe y estaba dispuesta a cooperar con los países africanos para ayudar a esos pueblos en su lucha por la independencia.

550. El representante de Italia dijo que era lamentable que el proyecto de resolución sometido a la consideración del Comité estuviese redactado en términos que hacían imposible que su delegación lo apoyase. Su delegación también lamentaba que el texto original sobre el cual podría haber habido considerable acuerdo en el Comité, hubiera sido sustituido por un nuevo proyecto que planteaba el discutido punto del uso de la fuerza. Se recordará que durante el debate sobre Rhodesia del Sur celebrado en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, había resultado evidente que los Miembros de las Naciones Unidas estaban profundamente divididos sobre esa cuestión. Su delegación tenía reservas respecto a la introducción de un párrafo en el que se solicitaba el uso de la fuerza, aunque reconocía que la cuestión de Rhodesia del Sur era sumamente importante y compartía el objetivo de las delegaciones africanas. Sus reservas obedecían a dos motivos. En primer lugar, sólo en última instancia se debía pensar en recurrir al uso de la fuerza. En segundo lugar, la delegación de Italia no encontraba ninguna disposición en la Carta que autorizara el uso de la fuerza conforme a los términos sugeridos en el proyecto de resolución. Esa delegación estimaba que al introducir una cuestión sobre la que estaban tan divididas las opiniones sólo se conseguía disminuir el número de delegaciones que apoyarían el proyecto de resolución. Además, el cuarto párrafo del preámbulo era engañoso pues no tenía en cuenta cierto número de circunstancias y de hechos, en particular el hecho de que el Reino Unido había adoptado medidas y de que esas medidas habían recibido la aprobación del Consejo de Seguridad y habían sido aplicadas por la inmensa mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. A juicio de su delegación, la fórmula siguiente hubiera sido más apropiada: "Considerando que las medidas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido y apoyadas por el Consejo de Seguridad no han logrado hasta la fecha derribar el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur".

551. Los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva deberían estar redactados de modo que se evitase la confusión entre las responsabilidades del Consejo de Se-

guridad y las de la Asamblea General. Sin embargo, su delegación estaba de acuerdo con el sentido intrínseco de los dos párrafos, es decir, que la situación en Rhodesia del Sur estaba llena de peligros en potencia y que el Consejo de Seguridad era el órgano apropiado para examinar las posibles consecuencias de la situación y adoptar cualquier medida que pudiera ser necesaria. Al Consejo de Seguridad, y no al Comité, correspondía indicar si esas medidas se tomaban en virtud del Capítulo VI o del Capítulo VII de la Carta. Además, el contexto jurídico no era lo que garantizaba necesariamente la eficacia de una acción política sino más bien el carácter de las medidas adoptadas y la determinación política de aplicarlas.

552. Habida cuenta de esas consideraciones, la delegación italiana se abstendría de votar sobre el proyecto de resolución. En conclusión, el orador subrayó que su delegación siempre había abogado por el establecimiento de la ley y el orden en Rhodesia del Sur y por el reconocimiento de derechos iguales a todos los habitantes de ese país y los había apoyado sin reservas. Cualquier diferencia que pudiera existir entre su delegación y la mayoría de los miembros del Comité se refería no a los objetivos sino únicamente a los métodos que se habían de seguir para lograr dichos objetivos.

553. El representante del Irak dijo que el representante de Italia había expresado la opinión de que, si el proyecto de resolución original (A/AC.109/L.272) hubiera sido presentado al Comité, habría obtenido una mayoría mucho más amplia que el texto revisado. La delegación del Irak no creía que la fuerza de una resolución residiese en la medida del apoyo que obtuviera; era bien sabido que en materia de colonialismo las resoluciones débiles obtenían generalmente una aceptación más o menos unánime, mientras que las fuertes no lo conseguían. Por lo tanto, su delegación prefería una resolución enérgica adoptada por la mayoría a una resolución débil aprobada por unanimidad.

554. En segundo lugar, el representante de Italia había hablado del uso de la fuerza como último recurso. El orador deseaba señalar que ya habían transcurrido cinco meses y no creía que los que habían votado a favor de las diversas resoluciones sobre Rhodesia del Sur hubieran pensado en esperar años antes de recomendar el uso de la fuerza. Estaba de acuerdo con el representante de Italia en que recomendar el uso de la fuerza era prerrogativa del Consejo de Seguridad. La referencia al uso de la fuerza que figuraba en el párrafo 4 del proyecto de resolución era consecuencia natural de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, que hablaba de "aplastar" la rebelión de Ian Smith; quienes habían votado a favor de esa resolución sin duda pensaban en algo más que en un embargo de petróleo para "aplastar" la rebelión. Además, en el párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se recomendaba al Consejo de Seguridad que estudiase las demás medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta, y ese Capítulo trataba del uso de la fuerza.

555. Con respecto a la observación del representante de Italia sobre la redacción del párrafo 5 de la parte dispositiva, el orador señaló que el Consejo de Seguridad en su resolución 221 (1966) se había referido ya a la situación en Rhodesia del Sur como una amenaza a la paz.

556. Aunque los puntos mencionados por el representante de Italia pudieran impedir a ese representante votar a favor del proyecto de resolución, la delegación del Irak estaba convencida de que el proyecto representaba el mínimo que el Comité podía aprobar.

557. El representante de Italia, ejerciendo su derecho a responder, dijo que siempre le había inquietado el empleo de las palabras "fuerte" o "débil" para describir una resolución: lo importante era que la resolución aprobada estuviese de acuerdo con los propósitos perseguidos por el Comité y con el contexto de la situación que se examinaba. No había dicho ciertamente que hubiera preferido el proyecto de resolución original por ser una resolución "débil"; sólo había dicho que ese proyecto hubiera logrado una considerable medida de acuerdo en el Comité y no se podía negar que cuanto más grande fuera la mayoría por la cual se adoptaba una resolución, más autoridad tendría.

558. Al referirse a su observación de que el uso de la fuerza debía ser solamente el último recurso, el representante del Irak había hablado de los tristes cinco meses transcurridos desde la declaración unilateral de independencia. El orador deseaba recordarle que Italia había luchado cien años antes de lograr la unidad y la independencia. Las situaciones no eran, por cierto, comparables; pero convenía considerar esas cuestiones con cierta perspectiva histórica. En todo caso, su principal objeción a la referencia al uso de la fuerza en el proyecto de resolución revisado era que no aparecía en el párrafo 6 de la parte dispositiva, en el cual se contemplaba la acción por parte del Consejo de Seguridad, sino en el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el cual se exhortaba a la Potencia administradora a recurrir al uso de la fuerza. Esa exhortación a la Potencia administradora era contraria al espíritu mismo de la Carta y la delegación de Italia no podría jamás estar de acuerdo con ella.

559. El representante de la Costa de Marfil dijo que su delegación, que era una de las patrocinadoras del proyecto de resolución, confiaba en que sería adoptado por unanimidad. Las medidas recomendadas en el proyecto de resolución eran las que ya habían sido aprobadas en otras ocasiones; al exhortar a la Potencia administradora a "que adoptase todas las medidas eficaces, incluido el uso de la fuerza", el proyecto de resolución no hacía más que repetir lo que había dicho el Consejo de Seguridad, que ya en dos oportunidades había adoptado decisiones similares.

560. El representante de Malí dijo que su delegación confiaba en que todas las delegaciones apoyaban el proyecto de resolución, cuyas recomendaciones representaban el mínimo que el pueblo de Zimbabue tenía derecho a esperar. El párrafo 4 de la parte dispositiva pedía simplemente a la Potencia administradora que emplease todos los medios a su alcance, incluso la fuerza armada, para poner fin al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur. El Reino Unido tenía la obligación de actuar en defensa de los intereses del pueblo de Zimbabue y para garantizar su seguridad. La delegación de Malí había participado como coautora del proyecto de resolución precisamente para ayudar a la Potencia administradora a ejercer sus prerrogativas.

561. El representante de los Estados Unidos de América dijo que aunque su delegación estaba en desacuerdo con varios puntos de algunas de las declara-

ciones hechas durante el debate y con ciertas disposiciones del proyecto de resolución, convenía en general con los objetivos perseguidos, o sea, el gobierno democrático, la libre determinación y la independencia para toda la población de Rhodesia del Sur sobre una base aceptable para la población del país en general.

562. Las medidas prácticas adoptadas por su país para alcanzar esos objetivos habían sido descritas detalladamente en el Consejo de Seguridad. Su delegación desearía que otros países adoptasen medidas análogas para ayudar al Reino Unido a cumplir sus obligaciones con el pueblo de Rhodesia del Sur.

563. La delegación de los Estados Unidos apoyaba las partes del proyecto de resolución que afirmaban que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era aplicable a la cuestión de Rhodesia, atacaban la política de discriminación racial en ese país y reconocían la legitimidad de las aspiraciones del pueblo al goce pleno de sus derechos, entre los que se contaba el derecho a la libre determinación.

564. El 9 de abril el Consejo de Seguridad había adoptado una medida importante en aplicación del programa de sanciones económicas contra Rhodesia del Sur. El efecto total de esa medida todavía no se había sentido y su delegación consideraba por lo tanto que era demasiado pronto para decidir tan firmemente como lo hacía el proyecto de resolución qué medidas adicionales podrían ser necesarias. La delegación de los Estados Unidos no podía, por consiguiente, apoyar el proyecto de resolución y se abstendría en la votación.

565. Rhodesia del Sur continuaba siendo uno de los problemas más importantes sometidos al Consejo de Seguridad, y en él preferirían los Estados Unidos expresar sus opiniones sobre la política y las medidas adicionales que pudieran corresponder. El orador creía preferible que cualquier contribución que los Estados Unidos pudieran hacer a la solución del problema fuera hecha en el Consejo de Seguridad en el momento adecuado.

566. El representante de Venezuela dijo que de la declaración hecha por su delegación durante el debate general se desprendería que estaba de acuerdo en general con el fondo y con la forma del proyecto de resolución A/AC.109/L.272. Por ello había figurado como coautora de dicho proyecto. Sin embargo, por decisión del grupo afroasiático del Comité se habían introducido cambios substanciales en el texto que habían hecho imposible que Venezuela continuara patrocinándolo como coautora, por tener serias reservas sobre esos cambios y sobre la redacción definitiva del proyecto de resolución.

567. La delegación de Venezuela no podía apoyar el párrafo 3 de la parte dispositiva del texto revisado, que excedía el mandato del Comité Especial. Venezuela no estaba convencida de que el Comité pudiera emplear el término "condena", el cual tenía un significado preciso dentro del lenguaje de la Carta y acarrearía consecuencias muy graves que sólo podían ser decididas por el Consejo de Seguridad. En todo caso, sería al propio Consejo y no al Comité Especial al que correspondería "condenar" a un Estado por el incumplimiento de sus resoluciones, con todas las consecuencias que ello implica. Tanto más cuanto que la resolución del Consejo de Seguridad sólo exhortaba a los Estados Miembros y no exigía u obligaba a cumplir dicha resolución. Su delegación había expuesto en múltiples ocasiones sus opiniones en lo referente a la estricta ob-

servancia del respeto a la competencia exclusiva de cada uno de los órganos de las Naciones Unidas de acuerdo con las disposiciones de la Carta.

568. En lo que se refería al párrafo 4 de la parte dispositiva, su delegación había dicho ya en otra oportunidad que no podía aceptar el empleo de la fuerza. Si algunas grandes Potencias insistían en que se respetase el principio de la delimitación de la competencia de los órganos de las Naciones Unidas, negándose incluso a contribuir a los gastos que las decisiones tomadas por un órgano que consideraren no adecuado acarrearían, los pequeños Estados — incluso Venezuela — tenían aún mayor razón para hacerlo así. La única defensa efectiva de los derechos de los pequeños Estados residía en el respeto estricto de las disposiciones de la Carta. La fuerza había sido empleada hasta ahora para imponer la voluntad de los poderosos y suprimir la libertad de los débiles. El Comité Especial no ayudaría al pueblo de Rhodesia arrogándose la competencia del Consejo de Seguridad. El recurso unilateral a la fuerza armada comprometería la causa de los pequeños Estados al ofrecer un precedente para un tipo de acción estrictamente reglamentado por la Carta en su Capítulo VII. Las Naciones Unidas se basaban en la renuncia al uso de la fuerza, que sólo estaba autorizada en caso de legítima defensa individual o colectiva en los casos estrictamente reglamentados por la Carta, y la decisión era de la exclusiva competencia del Consejo de Seguridad. Venezuela no podía, por lo tanto, exhortar o invitar con su voto a un Estado a usar unilateralmente la fuerza. Por razones muy poderosas Venezuela veía con enorme desconfianza el empleo de la fuerza, aun cuando fuera colectivamente, tanto en el plano regional como en el internacional. Con mucha más razón tenía que ver con extrema desconfianza todo intento de legitimar el uso unilateral de la fuerza por un Estado Miembro, cualquiera que él fuera.

569. Por esas razones la delegación de Venezuela se vería obligada a abstenerse en la votación sobre los párrafos 3 y 4 del proyecto de resolución, y pedía que se votara por separado sobre dichos párrafos.

570. En lo que se refería al párrafo 5 de la parte dispositiva, por las razones ya expuestas la delegación de Venezuela consideraba que el Comité Especial no tenía competencia para calificar ninguna situación de amenaza a la paz y a la seguridad. Eso era de la competencia del Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 39 de la Carta. El Comité podía señalar a la atención del Consejo de Seguridad una situación, pero era al Consejo al que correspondía calificarla. Venezuela se abstendría de votar sobre el párrafo 5, como se había abstenido en la Asamblea General cuando se había votado la resolución 2022 (XX), a cuyo párrafo 13 se refería ese párrafo. Pedía que se votara por separado sobre el párrafo 5.

571. La delegación de Venezuela votaría a favor del proyecto de resolución en su conjunto.

572. El representante del Reino Unido recordó que su delegación no había opuesto objeción a que se discutiera la cuestión de Rhodesia del Sur con carácter de prioridad, porque comprendía y compartía la profunda preocupación del Comité por esa cuestión. El Gobierno del Reino Unido nunca había restado importancia a la gravedad — ni tampoco a las grandes dificultades y a los peligros — de la situación.

573. Muchas de las cosas que se habían dicho en el Comité se prestaban a falsas interpretaciones y algu-

nos comentarios, como las acusaciones de complacencia, falta de decisión o confabulación, habían sido totalmente equivocadas. Al mismo tiempo que rechazaba reproches tan mal encaminados, el Reino Unido seguía convencido de que nada útil se lograría continuando la disputa sobre hechos o motivos. Según había declarado recientemente en el Consejo de Seguridad (1277a. sesión), el Reino Unido no estaba tratando de provocar ni de responder a las provocaciones. Su preocupación constante era lo que se había de hacer para alcanzar objetivos sobre los que había amplio acuerdo.

574. Las medidas ya aplicadas habían sido de vasto alcance y mucho más eficaces de lo que muchos deseaban reconocer. El Reino Unido estaba agradecido a todos los que habían respondido a su llamamiento de actuar como su Gobierno, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1965.

575. La determinación del Gobierno del Reino Unido de poner fin a la rebelión y trabajar constantemente para conseguir un arreglo aceptable para la totalidad de la población de Rhodesia del Sur había sido ya expuesta con claridad y confirmada repetidamente. Su Gobierno continuaba y continuaría persistiendo hasta que se hubieran alcanzado esos objetivos declarados.

576. Su delegación reservaba su posición sobre el fondo del proyecto de resolución, acerca del cual no deseaba hacer comentarios. Sin embargo, en relación con el párrafo 4 de la parte dispositiva, recordaba al Comité que el punto de vista de su Gobierno sobre el uso de la fuerza había sido ya expuesto en muchas ocasiones. En cuanto a los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva, era también bien conocida su opinión acerca de la pertinencia de que el Comité determinase en cuanto a la paz y la seguridad.

577. El Reino Unido se abstendría en la votación sobre el proyecto de resolución en su totalidad y sobre los párrafos por separado.

578. El representante del Uruguay dijo que su delegación votaría a favor del proyecto de resolución en su totalidad, que estaba de acuerdo con los principios básicos sostenidos por el Uruguay acerca de la cuestión de Rhodesia del Sur. Sin embargo, su delegación no participaría en ninguna votación separada sobre los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva, referentes a la actitud que debería adoptar el Consejo de Seguridad. Su delegación desearía que se hiciera constar su posición en el informe del Comité.

579. El Uruguay se abstendría en la votación sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva, como se había abstenido en la votación sobre el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General, que contenía el mismo concepto del uso de la fuerza.

580. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, hubiera sido preferible no mencionar por su nombre a ciertos Estados sobre los cuales no recaía la responsabilidad principal por la cuestión considerada. En todos los casos de colonización y de discriminación racial el Uruguay no había vacilado en condenar a los Estados directamente responsables. Pero en el caso que se estaba tratando hubiera sido preferible no diluir la responsabilidad refiriéndose a responsabilidades secundarias.

581. El representante de Dinamarca lamentó que el texto revisado del proyecto de resolución fuera mucho

más allá que la versión original, particularmente en lo que se refería al uso de la fuerza. Su delegación hubiera podido votar a favor del texto original, con unas pocas reservas solamente; pero no creía que el Comité debía adoptar medida tan radical como la de recomendar el uso de la fuerza. En la delicada situación existente todos los esfuerzos debían concentrarse en la aprobación y la aplicación por acuerdo entre el Reino Unido y la inmensa mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, de las medidas más enérgicas posibles para deponer el régimen de Smith.

582. Por consiguiente, aunque Dinamarca podía apoyar la mayoría de los párrafos del proyecto de resolución revisado, se vería obligada a abstenerse cuando se lo pusiera a votación. Era más importante ver que las resoluciones consiguieran el objetivo deseado mediante la unidad de acción, que calificar su redacción de "débil" o "fuerte". El texto original del proyecto de resolución no era débil; era mejor y más realista. Desgraciadamente, como resultado de los cambios introducidos en él, habría menos votos a su favor.

583. El representante de Chile dijo que su delegación podía apoyar la mayoría de los cambios que se reflejaban en el texto revisado del proyecto de resolución, pero no la inclusión, en el párrafo 4 de la parte dispositiva de una exhortación a la Potencia administradora para que hiciera uso de la fuerza. Conforme a la Carta, el uso de la fuerza estaba prohibido salvo cuando lo autorizase el Consejo de Seguridad o en casos de legítima defensa contra ataque armado. Aun cuando sería sin duda decisivo para aplastar la rebelión de Rhodesia del Sur, el uso de la fuerza por el Reino Unido establecería un precedente peligroso para otros casos coloniales. Las Naciones Unidas no debían exhortar a recurrir a la fuerza, a menos que se hiciera por autorización del Consejo de Seguridad. La opinión de su delegación sobre ese asunto había sido expuesta en la Asamblea General en el curso de los debates sobre el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 2022 (XX). Su delegación se abstendría en la votación sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

584. Chile votaría a favor de los otros párrafos y del proyecto de resolución en su totalidad.

585. El representante del Irak dijo que la diferencia entre el texto original y el texto revisado consistía en que el texto revisado condenaba la falta de aplicación por ciertos Estados, y sobre todo por Sudáfrica y Portugal, de las resoluciones de las Naciones Unidas, y exhortaba a la Potencia administradora a recurrir a la fuerza. Ciertas delegaciones, que no podían votar a favor de esa última disposición, podrían votar por la condenación de ciertos Estados. Por esa razón se debía votar por separado sobre los párrafos 3 y 4.

586. En su 407a. sesión, el Comité Especial celebró una votación nominal sobre el proyecto conjunto de resolución (A/AC.109/L.272/Rev.1), con el siguiente resultado:

El párrafo 3 de la parte dispositiva fue aprobado, en votación nominal, por 20 votos contra ninguno y 4 abstenciones, a saber:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Dinamarca, Etiopía, India, Irak, Irán, Italia, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Venezuela.

El párrafo 4 de la parte dispositiva fue aprobado, en votación nominal, por 16 votos contra ninguno y 8 abstenciones, a saber:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uruguay, Venezuela.

El párrafo 5 de la parte dispositiva fue aprobado, en votación nominal, por 18 votos contra ninguno y 5 abstenciones, a saber:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Dinamarca, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Estados Unidos de América, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Venezuela.

El proyecto de resolución en su totalidad fue aprobado en votación nominal por 19 votos contra ninguno y 5 abstenciones, a saber:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

587. El texto de la resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur (A/AC.109/158) tal como fue aprobado por el Comité Especial en su 407a. sesión, celebrada el 21 de abril de 1966, dice lo siguiente:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Profundamente preocupado por la explosiva situación existente en Rhodesia del Sur,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, aprobada el 14 de diciembre de 1960,

"Recordando además las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Rhodesia del Sur, especialmente las 217 (1965), de 20 de noviembre de 1965, y 221 (1966), de 9 de abril de 1966, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y sobre todo la 2022 (XX), de 5 de noviembre de 1965, y las resoluciones pertinentes del Comité Especial,

"Considerando que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no ha adoptado las medidas necesarias y adecuadas para derribar el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur,

y para aplicar las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General,

"Observando que algunos Estados, incluidos Estados Miembros de las Naciones Unidas, dan su apoyo activo al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur cuando se niegan a aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y sobre todo la resolución 217 (1965),

"1. Reafirma los derechos inalienables de la población de Rhodesia del Sur a la libertad y la independencia conforme a la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reconoce la legitimidad de su lucha por el disfrute de sus derechos, tal como se hallan enunciados en la Carta de las Naciones Unidas;

"2. Reafirma en especial la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General, que condena la política de discriminación racial y segregación que se practica en Rhodesia del Sur y que constituye un crimen de lesa humanidad;

"3. Condena la falta de aplicación por algunos Estados, y sobre todo por Sudáfrica y Portugal, de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, del Comité Especial y del Consejo de Seguridad, al dar apoyo y ayuda al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur;

"4. Exhorta a la Potencia administradora a que adopte todas las medidas eficaces, incluido el uso de la fuerza, para poner fin al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur;

"5. Considera que la explosiva situación existente en Rhodesia del Sur sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales;

"6. Recomendando al Consejo de Seguridad que estudie con urgencia la adopción de las demás medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para poner en práctica sus decisiones relativas a Rhodesia del Sur;

"7. Decide transmitir al Consejo de Seguridad las actas de los debates celebrados en el Comité Especial acerca de esta cuestión;

"8. Decide mantener la cuestión de Rhodesia del Sur en el programa del Comité Especial y examinar la situación siempre que lo considere necesario."

588. El texto de la resolución, junto con las actas del debate celebrado en el Comité Especial sobre la cuestión, fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 21 de abril de 1966²⁰.

E. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL TERRITORIO

Decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad en 1966

589. En sus sesiones 1276a. y 1277a., del 9 de abril de 1966, el Consejo de Seguridad reanudó el examen de la cuestión de Rhodesia del Sur, para el que se basó en una carta, de fecha 7 de abril de 1966²¹, dirigida al Presidente del Consejo por el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en

²⁰ *Ibid.*, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7263.

²¹ Documento S/7235, incorporado en el acta de la 1276a. sesión del Consejo de Seguridad.

que se solicitaba la celebración de una sesión de emergencia del Consejo con objeto de considerar la situación producida por el arribo a Beira de un petrolero, con la posible consecuencia de que llegaran a Rhodesia importantes cantidades de petróleo, en contravención del embargo petrolero impuesto por su Gobierno de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad en su resolución 217 (1965) de 20 de noviembre de 1965. En su 1277a. sesión, el Consejo de Seguridad aprobó por 10 votos (Argentina, China, Estados Unidos de América, Japón, Jordania, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido y Uganda) contra ninguno y 5 abstenciones (Bulgaria, Francia, Malí, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay) la resolución 221 (1965). El texto de la resolución es el siguiente:

"El Consejo de Seguridad,

"Recordando sus resoluciones 216 (1965), de 12 de noviembre de 1965, y 217 (1965), de 20 de noviembre de 1965, y en particular su exhortación a todos los Estados a fin de que hicieran lo posible para romper sus relaciones económicas con Rhodesia del Sur, incluso establecer un embargo sobre el petróleo y sus productos,

"Profundamente preocupado por las noticias de que podrían llegar a Rhodesia del Sur importantes suministros de petróleo como resultado del arribo a Beira de un barco petrolero y del acercamiento de otro petrolero, lo cual podría llevar a la reanudación del bombeo a través del oleoducto de la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia con el asentimiento de las autoridades portuguesas,

"Considerando que estos suministros proporcionarían gran ayuda y aliento al régimen ilegal de Rhodesia del Sur y por ende le permitirán prolongar su existencia,

"1. Determina que la situación así provocada constituye una amenaza a la paz;

"2. Pide al Gobierno de Portugal que no permita el bombeo de petróleo desde Beira a Rhodesia del Sur a través del oleoducto;

"3. Pide al Gobierno de Portugal que no reciba en Beira el petróleo destinado a Rhodesia del Sur;

"4. Pide a todos los Estados que tomen las providencias del caso para desviar cualquiera de sus naves de la que razonablemente se pueda pensar que transporta petróleo destinado a Rhodesia del Sur y navegue rumbo a Beira;

*"5. Pide al Gobierno del Reino Unido que impida, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, la llegada a Beira de naves de las que razonablemente se pueda pensar que transportan petróleo destinado a Rhodesia del Sur, y autoriza al Gobierno del Reino Unido a detener y apresar el petrolero denominado *Joanna V* a su salida de Beira en caso de que descargue petróleo en ese puerto."*

590. El Consejo de Seguridad, en sus sesiones 1278a. a 1285a., celebradas entre el 17 y el 23 de mayo de 1966, reanudó su examen de la cuestión de Rhodesia del Sur, sobre la base de una carta de fecha 10 de mayo de 1962²² enviada por 32 Estados africanos que pe-

dían al Presidente del Consejo de Seguridad que tuviera a bien convocar inmediatamente una reunión del Consejo sobre la situación en Rhodesia del Sur a fin de examinar, en conformidad con el Capítulo VII de la Carta, las medidas necesarias para establecer el imperio de la mayoría en Rhodesia del Sur con arreglo a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

591. El 11 de mayo, Malí, Nigeria y Uganda presentaron un proyecto de resolución sobre este problema²³. En conformidad con su parte dispositiva, el Consejo: 1) determinaría que la situación en Rhodesia del Sur seguía constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales; 2) pediría a todos los Estados que aplicasen las medidas del caso para la ruptura completa de las relaciones económicas y de las comunicaciones con Rhodesia del Sur en conformidad con el Artículo 41 de la Carta; 3) invitaría muy especialmente a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica a que adoptasen inmediatamente las medidas necesarias con arreglo al Artículo 41 de la Carta para romper las relaciones económicas y las comunicaciones con Rhodesia del Sur; 4) pediría a todos los Estados y en especial a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica que adoptasen las medidas pertinentes para impedir el suministro de petróleo y de sus productos a Rhodesia del Sur; 5) pediría al Reino Unido que tomase las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta para impedir, con ayuda de sus fuerzas aéreas, navales o terrestres, todo abastecimiento de Rhodesia del Sur, especialmente en petróleo y sus productos; 6) reafirmaría los derechos inalienables del pueblo de Rhodesia del Sur a la libertad y a la independencia en conformidad con la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reconocería el carácter legítimo de la lucha que llevaba a cabo para obtener el disfrute de sus derechos, según se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas; 7) pediría al Reino Unido que entablase consultas con los dirigentes de los partidos políticos africanos para el establecimiento de un régimen conforme a las aspiraciones del pueblo de Zimbabwé; 8) señalaría a la atención del Gobierno del Reino Unido las perjudiciales consecuencias que las negociaciones actuales podrían acarrear para el establecimiento de un régimen fundado en el sufragio universal; y 9) pediría al Gobierno del Reino Unido que tomase todas las medidas necesarias, inclusive el uso de la fuerza, para abolir el régimen de la minoría racista en Rhodesia del Sur y para asegurar la aplicación inmediata de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

592. En su 1285a. sesión, celebrada el 23 de mayo de 1966, el Consejo de Seguridad procedió a votar el proyecto de resolución. En esta votación el proyecto de resolución no fue aprobado. No logró la mayoría necesaria, pues obtuvo 6 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, en la siguiente forma:

Votos a favor: Bulgaria, Jordania, Malí, Nigeria, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Votos en contra: Nueva Zelandia.

Abstenciones: Argentina, China, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uruguay.

²² *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo primer año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documentos S/7285 y Add.2.*

²³ *Ibid.*, documento S/7285/Add.1.

*Acontecimientos políticos**Población*

593. Se recordará que, según el *Government Monthly Statistical Report* de Rhodesia del Sur, de enero de 1966, la población de Rhodesia del Sur había alcanzado la cifra sin precedentes de 4.330.000 habitantes, con una población blanca de 224.000 habitantes. (Véase el párrafo 123, *supra*.) Según cifras dadas a conocer por la Oficina Central de Estadística de Salisbury el 28 de febrero de 1966, en Rhodesia del Sur hubo en 1965 un aumento neto de 4.463 inmigrantes blancos, en comparación con una disminución neta de 6.722 en 1964.

Acontecimientos "constitucionales"

594. El 17 de febrero de 1966, la "Asamblea Legislativa" de Rhodesia del Sur aprobó por 48 votos contra 2 el *Constitutional Ratification Bill*, "para ratificar la Constitución de 1965". Los trece miembros de la oposición oficial, integrantes del United Peoples Party, africanos todos, boicotearon la votación. La ley la promulgó el 18 de febrero de 1966 el Sr. Dupont, "Administrador del Gobierno".

595. El Sr. Ian Smith declaró por la radio, el 27 de marzo de 1966, que proponía constituir una comisión para recomendar a su "Gobierno" nuevas garantías constitucionales que reemplazaran en la "Constitución de 1965" las disposiciones relativas a reformas de las cláusulas reservadas.

Emergency Powers Act

596. El 8 de marzo de 1966 la "Asamblea Legislativa" de Rhodesia del Sur aprobó por 44 votos contra 15 la *Emergency Powers Amendment Bill*. En virtud de dicha ley, que promulgó después el "Administrador del Gobierno", se amplían las circunstancias en que el "Administrador del Gobierno" está facultado para proclamar un estado de emergencia, se facilita la expedición de reglamentaciones a raíz de la declaración del estado de emergencia y se incrementa la variedad de asuntos respecto a los cuales pueden expedirse rápidamente reglamentaciones de emergencia.

597. Con arreglo a la ley actual — la *Emergency Powers Act* de 1960 — el Gobernador puede proclamar el estado de emergencia si considera suficientemente amenazados la seguridad pública, el orden público o el mantenimiento de un servicio esencial en Rhodesia del Sur. El régimen de Ian Smith sostiene que, después de la declaración de independencia, y de conformidad con la "Constitución de 1965" el "Administrador del Gobierno" está investido ahora de aquellas facultades.

598. En virtud de la reforma a dichas facultades se agrega la de que "el Administrador del Gobierno" puede declarar el estado de emergencia si "el Gobierno de otro país amenaza con tomar inmediatamente o ha tomado medidas tales que entrañen la posibilidad de perturbar la paz, el orden y el buen gobierno de Rhodesia del Sur".

599. En las deliberaciones de la "Asamblea Legislativa", el Sr. Desmond Lardner-Burke, "Ministro de Justicia y Orden Público", declaró que Rhodesia del Sur no debía dejar resquicio alguno de que pudieran valerse sus enemigos para atacar, trastornar y obstaculizar el buen gobierno, durante el que calificó de momento vital y crítico del surgimiento del Estado independiente y soberano. Sostuvo que la ley no introdu-

cía modificaciones notables a la *Emergency Powers Act* de 1960. El "Gobierno" sólo quería que todos supieran con absoluta claridad, que toda ley, resolución de la Asamblea y medida legislativa subsidiaria promulgada y en vigor a partir del 11 de noviembre de 1965, en conformidad con el capítulo 33 de la *Emergency Powers Act*, tenía validez y era ley del país sin que hubiera la más remota posibilidad de duda.

600. Refiriéndose a las propuestas por las que se permitiría que se declarase el estado de emergencia en Rhodesia del Sur como consecuencia de medidas adoptadas por el Gobierno de otro país, declaró que se trataba de un concepto nuevo y obvio cuando se tratase de amenazas a Rhodesia del Sur procedentes de fuera.

601. Muchas de las nuevas disposiciones de emergencia — unas veinte series de reglamentaciones diferentes — adoptadas por el régimen ilegal después de la declaración unilateral de independencia, se han incorporado, conforme a la ley, en las atribuciones legales de emergencia. Las nuevas disposiciones se refieren principalmente a la fiscalización de la mano de obra, la censura y el control de las empresas.

Prolongación del servicio nacional

602. El 25 de marzo de 1966, el régimen de Smith dio a conocer un plan obligatorio de inscripción de todos los varones del país europeos, asiáticos y de color de diecisiete a sesenta años de edad. Según el anuncio, hecho por Lord Graham, "Ministro de Relaciones Exteriores y Defensa", se duplica de cuatro meses y medio a nueve meses el período de instrucción militar, de tiempo de paz, que han de recibir los jóvenes europeos, asiáticos y de color de Rhodesia del Sur. Además declaró que la inscripción obligatoria no era un llamamiento al servicio militar sino sencillamente un registro del potencial humano, utilizable en la forma y circunstancias que requiriese el interés nacional. La prolongación del servicio nacional tenía por objeto dar a Rhodesia del Sur una fuerza territorial mucho más eficaz y preparar oficiales jóvenes para reemplazar a los que están cerca del retiro.

United Peoples Party

603. El 25 de marzo de 1966, el United Peoples Party, partido de oposición formado íntegramente por africanos que cuenta con trece representantes en la "Asamblea Legislativa" de Rhodesia del Sur, anunció que el Sr. Josiah Gondo, jefe del Partido, había sido reemplazado en el cargo por el Sr. Chad Chipunza.

El University College y el régimen ilegal

604. Más de 100 estudiantes, africanos en su mayoría, del University College de Rhodesia y Nyasalandia, organizaron manifestaciones, en el parque del establecimiento, del 16 al 18 de marzo de 1966. Los estudiantes protestaban por la declaración ilegal de independencia y por las restricciones que el régimen ilegal imponía a los estudiantes universitarios. El 17 de marzo de 1966, los estudiantes que tomaban parte en las manifestaciones recibieron el apoyo de más de 30 profesores de la Universidad, que publicaron una declaración en la que reiteraban su oposición al régimen ilegal y deploraban las restricciones impuestas a los estudiantes universitarios por el régimen de Rhodesia del Sur. El 18 de marzo de 1966, la policía de Salisbury

prohibió en la Universidad todas las reuniones públicas que no tuvieran fines educativos.

605. Los profesores y unos 300 estudiantes africanos y asiáticos dispusieron, además, boicotear enteramente las conferencias y clases de la Universidad. El 25 de marzo de 1966 se informó que tanto los estudiantes como los profesores que participaban en las manifestaciones y en el boicot habían vuelto a las clases.

606. El 13 de abril de 1966, el Dr. Walter Adams, Director del University College presentó su dimisión a las autoridades del colegio después de oponerse a las tentativas de la policía de capturar a un estudiante africano que volvió a las clases luego de haber huido de un campamento de restricción situado en Gonakudzingwa.

Reglamentación de la censura y Consejo Constitucional

607. El 12 de abril de 1966, el Constitutional Council de Rhodesia del Sur acordó que tres secciones de la *Emergency Powers (Control of Publications) Regulations*, de 1966, eran incompatibles con la declaración de derechos reconocida constitucionalmente. Las secciones de la reglamentación de la censura que el Constitutional Council consideró incompatibles con la declaración de derechos, y que no estaban comprendidas de otro modo en las disposiciones de la Constitución relativas a estados de emergencia, se refieren a los espacios en blanco, dejados en publicaciones, para indicar el texto censurado, a las atribuciones del censor para rectificar títulos o distribución de textos en la publicación y a las atribuciones del Director de Información para prohibir la distribución de una publicación en caso de que se viole dicha reglamentación.

608. En virtud de la Constitución de 1961, corresponde al Constitutional Council comprobar que los instrumentos legales no violen la declaración de derechos. Por la llamada "Constitución de 1965" se confieren al Constitutional Council las mismas atribuciones que le otorgó la Constitución de 1961.

609. El 21 de abril de 1966, el régimen de Rhodesia del Sur anunció que derogaría las secciones de la reglamentación de censura cuya legalidad objetó el Constitutional Council. Sin embargo, se mantendrían en vigor otras secciones de la reglamentación de la censura.

Manifestación en Salisbury contra el régimen ilegal

610. El 19 de abril de 1966 se produjeron, en municipios africanos de las inmediaciones de Salisbury, manifestaciones en contra del régimen ilegal. Según las informaciones, en Harare y en los municipios de Highfield, Mufakose y Kambazuma se apedrearon coches y edificios públicos. Por la ventana de una clínica de Mufakose se arrojó una bomba de gasolina.

611. Se informó que la policía de seguridad hizo disparos de advertencia para dispersar a los manifestantes. El 20 de abril de 1966 la policía informó que en los municipios africanos reinaba la calma. Se informó que un portavoz de la policía declaró que no se tenía conocimiento de que hubiera habido heridos a consecuencia de los disparos de advertencia hechos para dispersar a los manifestantes. Se había detenido a algunos de éstos, pero el portavoz de la policía dijo que no podía dar el número exacto.

Prolongación del estado de emergencia

612. El 21 de abril de 1966, la "Asamblea Legislativa" de Rhodesia del Sur, por 43 votos contra 13, prorrogó por tres meses más el estado de emergencia que el régimen de Smith había proclamado en Rhodesia del Sur el 5 de noviembre de 1965. El estado de emergencia había sido prorrogado por tres meses a principios de febrero de 1966.

613. Al presentar la propuesta de prórroga, el Sr. Desmond Lardner-Burke, "Ministro de Justicia y Orden Público", declaró que la amenaza más grave a Rhodesia del Sur en esos momentos eran las nuevas medidas que pudiera tomar el Reino Unido para derrocar al "Gobierno". Era posible que el Gobierno del Reino Unido adoptase medidas — dijo — porque, por desagradable que fuera para el Reino Unido, no era probable que con las sanciones económicas y el embargo del petróleo se diera en un futuro previsible el golpe de gracia previsto.

Relaciones con el Reino Unido

614. El Sr. N. D. Watson, Subsecretario Adjunto de la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*, visitó a Rhodesia del Sur (y a Zambia, por corto tiempo) del 16 al 28 de marzo de 1966. Según fuentes allegadas al Gobierno del Reino Unido, la visita tenía por objeto examinar la actual estructura orgánica de la oficina de la Alta Comisión del Reino Unido, que aún desempeñaba ciertas funciones. El 22 de marzo de 1966 la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* expidió una declaración según la cual el Sr. Watson se ocupaba en tratar del hostigamiento de que eran objeto los restantes funcionarios de la Alta Comisión del Reino Unido en Salisbury. Durante su estada en Rhodesia del Sur, el Sr. Watson celebró reuniones con representantes del "Departamento de Asuntos Exteriores" para tratar de la situación de la Alta Comisión del Reino Unido. El Sr. Watson también celebró reuniones con el Gobernador, Sir Humphrey Gibbs, para examinar la política del Gobierno del Reino Unido en Rhodesia del Sur y, en particular, el alcance de las posibles conversaciones con representantes del régimen de Smith.

615. El 21 de abril de 1966, el Sr. Harold Wilson dijo en la Cámara de los Comunes que el Sr. Duncan Watson, funcionario superior de la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*, que había estado en Salisbury en marzo, estaba autorizado para celebrar entrevistas con el Sr. Smith a fin de recibir en nombre del Primer Ministro sugerencias de aquél. El Sr. Wilson dijo que, a pesar de las reiteradas preguntas, no había habido respuesta. Un segundo funcionario de la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*, el Sr. John Hennings, se había trasladado después a Salisbury con autorización para proseguir aquellas gestiones. Aún se hallaba allí dispuesto a oír sugerencias. La condición principal puesta por el Gobierno del Reino Unido consistía en que cualesquiera fuesen las conversaciones no supondrían el reconocimiento del régimen ilegal. El Reino Unido, dijo, no estaba dispuesto a legalizar una rebelión contra la Corona.

616. El 23 de marzo de 1966, el régimen ilegal de Rhodesia del Sur anunció que se había pedido al Sr. Stanley Fingland, jefe de la misión del Reino Unido que aún permanecía en Rhodesia del Sur, que saliera del país. En una declaración pública, Lord Graham, "Ministro de Relaciones Exteriores", dijo que a raíz de la declaración unilateral de independencia habían sido

retirados el Alto Comisionado del Reino Unido en Salisbury y el Alto Comisionado de Rhodesia del Sur en Londres. Según la declaración, poco después iba a disponerse el retiro de los Altos Comisionados Adjuntos de ambos países. El Alto Comisionado Adjunto de Rhodesia del Sur salió del Reino Unido a fines de noviembre de 1965, pero el Gobierno del Reino Unido había cambiado de opinión y quería que el Sr. Fingland, Alto Comisionado Adjunto, permaneciera en Salisbury por tiempo indefinido. El "Gobierno de Rhodesia del Sur" no estaba dispuesto a consentir que continuara una representación desigual sobre esta base y había solicitado que el Sr. Fingland partiera tal como se había previsto primitivamente. El Sr. Fingland salió de Salisbury el 13 de abril de 1966 y fue reemplazado por el Sr. J. Hennings en la jefatura de la misión del Reino Unido.

617. El régimen de Smith también pidió que abandonara el país el Sr. N. A. I. French, Primer Secretario de la Alta Comisión del Reino Unido, aduciendo como motivo que había participado en actos de espionaje con objeto de socavar la economía y la seguridad de Rhodesia del Sur. La Oficina de Relaciones con el *Commonwealth* desmintió más tarde esas acusaciones. El Sr. French partió de Rhodesia del Sur el 24 de marzo de 1966.

618. El 16 de abril de 1966 el Sr. Smith anunció por radio que su "Gobierno" había decidido retirar el personal y cerrar la Rhodesia House de Londres. También había dado instrucciones para que se cerrase la "Embajada Británica" en Salisbury y se repatriase al personal. Declaró que la medida constituía una protesta contra la acción del Gobierno del Reino Unido al invocar el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, con objeto de que se lo autorizara a bloquear a Beira para impedir que llegara petróleo a Rhodesia del Sur. El 19 de abril de 1966, el Sr. Hennings declaró que había recibido confirmación escrita de la decisión del régimen ilegal de cortar todos los vínculos restantes con el Gobierno del Reino Unido.

619. El 26 de abril de 1966, el Sr. Smith informó en la "Asamblea Legislativa" de Rhodesia del Sur que estaba dispuesto a reabrir negociaciones con el Reino Unido en un esfuerzo por resolver sus diferencias. Estaba dispuesto a entablar negociaciones incondicionales con el Gobierno del Reino Unido en cualquier nivel, momento o lugar.

620. Dijo que había la creencia errónea de que había adoptado una actitud de obstinación que le impedía entablar conversaciones con el Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Wilson, o con cualquier otro representante del Gobierno del Reino Unido. Por lo que a su "Gobierno" se refería nunca había cerrado la puerta a las negociaciones y estaba siempre dispuesto a tomar parte en consultas constructivas con quienquiera que fuese.

621. El 28 de abril de 1966, el "Ministro de Relaciones Exteriores" de Rhodesia del Sur anunció que el Reino Unido y Rhodesia del Sur habían convenido en suspender por el momento el retiro de las Misiones de uno y otro país. El anuncio decía que la decisión obedecía a las consultas oficiosas que iban a entablar entre funcionarios de ambos países.

Información sobre la muerte de siete africanos

622. El 29 de abril de 1966, la policía de Rhodesia del Sur informó que había dado muerte a siete "terro-

ristas" africanos, en un nutrido tiroteo ocurrido en la zona de Sinoia, a unas 85 millas de Salisbury. El portavoz de la policía dijo que los siete pertenecían a la Zimbabwe African National Union (ZANU), uno de los dos partidos nacionalistas africanos prohibidos en Rhodesia del Sur. Los helicópteros de la Fuerza Aérea habían prestado apoyo a la unidad policial en el encuentro. Según la declaración, hubo detenidos que manifestaron haber hecho prácticas de terrorismo en la República Popular de China. Los componentes del grupo, según se dijo, habían penetrado en Rhodesia del Sur desde Zambia. Se dijo que el suceso representaba el primer choque conocido de guerrillas nacionalistas y fuerzas de seguridad de Rhodesia del Sur ocurrido después de la declaración ilegal de independencia.

La Organización de la Unidad Africana (OUA) y la cuestión de Rhodesia del Sur

623. El Consejo de Ministros de la OUA se reunió en Addis Abeba, Etiopía, del 28 de febrero al 5 de marzo de 1966 para estudiar la situación de Rhodesia del Sur y examinar el informe de su Comité de los Cinco. Al final de la reunión el Consejo de Ministros aprobó una resolución en la que: 1) renovaba el llamamiento que había hecho a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los países del mundo amantes de la paz para que no reconocieran al régimen racista de la minoría de Rhodesia; 2) pedía al Gobierno del Reino Unido que aplicara medidas eficaces, incluido el uso de la fuerza, que trajeran como consecuencia la caída inmediata del régimen de Ian Smith; 3) decidía establecer un "Comité de Solidaridad con Zambia" compuesto de cinco miembros, cuya tarea sería tratar de que los Estados Miembros tomaran medidas apropiadas en materia de asistencia técnica y economía a Zambia; 4) recomendaba a la Organización de la Unidad Africana y a los gobiernos interesados que no reconocieran a ningún partido y que en cambio prestaran ayuda solamente a los grupos de guerreros de Zimbabwe que estaban luchando activamente dentro de Rhodesia por liberar a su país del yugo colonialista y racista; 5) pedía a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que hasta el momento no habían tomado ninguna medida, que pusieran en práctica la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1965 e intensificaran sus esfuerzos para que se adoptaran otras medidas más eficaces, entre ellas la de poner en libertad a todos los dirigentes de Zimbabwe que se encontraban en campos de concentración semejantes a los de los nazis; 6) decidía recomendar a todas las delegaciones africanas ante las Naciones Unidas que prestaran apoyo a los Ministros de Argelia, Senegal y Zambia en sus esfuerzos por lograr que el Consejo de Seguridad examinara la situación de Rhodesia del Sur en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Portugal y la cuestión de Rhodesia del Sur

624. El 13 de abril de 1966, el Primer Ministro de Portugal, Dr. Antonio de Oliveira Salazar, en un discurso pronunciado en Lisboa, afirmó que el problema de Rhodesia del Sur podría desencadenar un enorme incendio con riesgo incluso para aquellos que se encontraban lejos. Aún se estaba a tiempo de salvarlo todo, pero también podría perderse todo si las pasiones hablaban con más fuerza que la razón. El caso de Rhodesia del Sur había cubierto el cielo de Africa de las

más negras nubes pero no era demasiado tarde para resolverlo de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido. Dijo que la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de abril, que había facultado al Reino Unido para emplear la fuerza con el fin de impedir que los petroleros con combustible para Rhodesia del Sur llegaran a Beira, había elevado a nivel internacional un problema exclusivamente interno del Reino Unido. Si las Potencias responsables daban otro paso en falso en sus intentos por resolver el problema de Rhodesia del Sur, podrían desencadenar un vasto incendio con riesgo para todos aquellos que se consideraban inmunes porque se encontraban lejos del lugar de los acontecimientos.

Sudáfrica y la cuestión de Rhodesia del Sur

625. El 15 de abril de 1966, el Embajador del Reino Unido en Sudáfrica, Sir Hugh Stephenson, llegó a Londres para celebrar consultas con el Gobierno del Reino Unido sobre asuntos relativos a las relaciones entre Sudáfrica y el régimen ilegal.

626. El 16 de abril de 1966, el Embajador de Sudáfrica en el Reino Unido, Dr. Carel de Wet, visitó al Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Harold Wilson, para entregarle un mensaje del Primer Ministro de Sudáfrica, Dr. Henrick Verwoerd. No se hizo ninguna declaración después de la reunión pero se comunicó que se había tratado la cuestión de Rhodesia del Sur.

627. El Embajador del Reino Unido volvió a Sudáfrica con un mensaje del Sr. Wilson para el Dr. Verwoerd. El 21 de abril de 1966, Sir Hugh Stephenson visitó al Dr. Verwoerd para cambiar impresiones. No se hizo declaración alguna después de esta visita.

El Primer Ministro del Reino Unido anuncia conversaciones oficiosas con Rhodesia del Sur

628. El 27 de abril de 1966, el Primer Ministro Wilson hizo en la Cámara de los Comunes una declaración sobre Rhodesia del Sur. Comunicó a la Cámara que, según había declarado el Gobierno clara y repetidamente durante los cinco últimos meses, cualquier persona de Rhodesia del Sur estaba en libertad de presentarse al Gobernador o representante británico en Salisbury con propuestas relativas a la base sobre la cual se podría llegar a una solución del problema. Como resultado de un informe reciente del Gobernador, se habían organizado entre funcionarios conversaciones oficiosas para examinar si existía realmente una base de este tipo.

629. El Sr. Wilson dijo que había recibido un informe del Gobernador la semana anterior, precisamente cuando su Secretario particular, el Sr. Oliver Wright, acababa de salir en avión para Pretoria para colaborar con el Embajador del Reino Unido en sus conversaciones con el Gobierno de Sudáfrica. Tenía instrucciones de hacer escala en Salisbury para cambiar impresiones con el Gobernador antes de seguir a Pretoria. Como resultado del informe del Sr. Wright sobre sus conversaciones con el Gobernador, el Sr. Wright recibió instrucciones de regresar a Salisbury el 22 de abril. El Gobernador preparó entonces una reunión entre el Sr. Wright, el Sr. Hennings, representante del Gobierno del Reino Unido en Salisbury, y el Sr. Smith.

630. Se había celebrado otra conversación preliminar en la que se llegó a un acuerdo para organizar las

conversaciones oficiosas que ahora se iban a celebrar. Estas conversaciones eran oficiosas y estaban encaminadas solamente a ver si en realidad existía una base de negociaciones; y no implicaban compromiso para ninguna de las partes.

631. En respuesta a las preguntas que se hicieron después de su declaración, el Sr. Wilson dijo que el Gobierno del Reino Unido siempre había estado dispuesto a celebrar conversaciones. Lo que había resultado decisivo habían sido las sanciones en lo relativo al petróleo y las medidas que el Reino Unido había adoptado recientemente en Beira con autorización de las Naciones Unidas. Esto era lo que había creado la situación en la que ahora podían desarrollarse las conversaciones. El Gobernador había desempeñado un papel principal al promover la reunión que dio origen a esta situación. Pero había manifestado claramente que no se trataba de negociaciones. El Gobierno del Reino Unido no estaba negociando con el régimen ilegal. Se trataba de conversaciones oficiosas para ver si existía una base sobre la cual pudieran desarrollarse negociaciones adecuadas. Con respecto a los principios que se incorporarían en un acuerdo definitivo, el Sr. Wilson dijo que aunque el Reino Unido estaba dispuesto a perdonar y olvidar mucho, no condonaría, ni estaba dispuesto a aceptar, un arreglo que sancionara un acto ilegal o que no satisficiera los principios que había establecido el Gobierno del Reino Unido y que el Sr. Smith mismo había aceptado en las negociaciones del año pasado. Creía que los países del *Commonwealth*, especialmente los que estuvieron representados en Lagos, reconocerían, como dijo en Lagos, que las sanciones económicas iban a ser eficaces. Se habían expresado muchas dudas en el sentido de que no lo serían. No quería influir de antemano en las conversaciones diciendo cómo se llevarían a cabo las negociaciones ni qué clase de mecanismo podría tener que establecerse, quizá sobre base bilateral, entre el Gobierno del Reino Unido y representantes de Rhodesia del Sur, posiblemente en el más amplio sentido; o si tendría que ser incorporado otro mecanismo — cosas todas que se habían discutido antes de la declaración ilegal del año anterior —. Se hablaría de todo ello en las conversaciones oficiosas que deberían desarrollarse lejos de toda publicidad y libres de presiones de todo tipo.

632. En el curso de las negociaciones relativas a la independencia, el año anterior, el Reino Unido estableció “cinco principios” como base para las negociaciones, a los que añadió un sexto principio el 25 de enero de 1966. Estos seis principios son los siguientes:

- 1) Debería mantenerse y garantizarse el avance sin obstáculos hacia el gobierno de la mayoría.
- 2) Deberían establecerse garantías contra las modificaciones retrogresivas de la Constitución.
- 3) También debería mejorarse inmediatamente la condición política de la población africana.
- 4) Deberían realizarse progresos hacia la eliminación de la discriminación racial.
- 5) El Gobierno británico debería ser convencido de que toda base propuesta para la independencia era aceptable para todo el pueblo de Rhodesia del Sur.
- 6) Sería necesario asegurar que, independientemente de la raza, no había opresión de la mayoría por la minoría o de la minoría por la mayoría.

Declaración del Sr. Smith sobre las conversaciones oficiosas

633. El 29 de abril de 1966, el Sr. Smith, hablando en la inauguración de la Feria Comercial de Africa Central, en Bulawayo, dijo que Rhodesia del Sur entraría en las conversaciones oficiosas "decidida a no rendirse nunca". Rhodesia del Sur, en realidad, no podía perder. Había lugar para maniobras por ambas partes, sin ceder en los principios básicos. Ni Rhodesia del Sur iba a renunciar a su independencia, ni el Reino Unido iba a reconocer la declaración unilateral de independencia. Ninguno de los dos lados iba a ceder terreno. Cuanto menos se dijera acerca de las conversaciones, mejor sería, para no prejuzgar sobre ellas antes que comenzaran. Continuó diciendo que Rhodesia del Sur había dado pruebas de que no podía soportar las sanciones.

Nueva evolución de las conversaciones oficiosas entre el Reino Unido y Rhodesia del Sur

634. El 5 de mayo de 1966, el Gobierno del Reino Unido anunció que las conversaciones oficiosas con Rhodesia del Sur empezarían en Londres en la segunda semana de mayo de 1966. El Gobierno del Reino Unido estaría representado en las conversaciones oficiosas por el Sr. Oliver Wright, Secretario particular del Primer Ministro Wilson (actualmente Embajador designado en Dinamarca), y el Sr. Duncan Watson, Subsecretario Adjunto en la Commonwealth Relations Office, que habían participado en la organización preliminar de las conversaciones. El 5 de mayo de 1966, el régimen de Smith también anunció los nombres de la "delegación" compuesta de tres personas que tomaría parte en las conversaciones. La delegación estaría presidida por Sir Cornelius Greenfield, Asesor Económico Principal del Sr. Smith. Los otros miembros serían el Sr. Stanley Morris, Presidente del Public Service Board (Junta de Servicio Público) y por el Sr. Gerald Clarke, Secretario del "gabinete de Rhodesia".

Situación económica

Generalidades

635. Además de la censura general en el país, el Gobierno ilegal ha impuesto también la censura a la publicación de detalles de cómo contrarrestar las sanciones internacionales. En la última semana de febrero de 1966, la Oficina Central de Estadística de Salisbury dejó de publicar la mayoría de sus boletines estadísticos sobre distintos sectores de la economía. En la lista de otras publicaciones gubernamentales específicamente suspendidas figuran los boletines ordinarios sobre el estado de la industria minera y los estados de cuentas que el Banco de Reserva de Rhodesia estaba obligado a publicar en virtud de la Ley del Banco de Reserva de 1964. La mayoría de las fuentes normales y ordinarias de información sobre el estado de la economía de Rhodesia del Sur son inutilizables desde que se declaró ilegalmente la independencia.

636. Se recordará que, el 5 de febrero de 1966, se promulgaron una nueva serie de disposiciones de emergencia para afianzar la supremacía del régimen de Ian Smith en la mayoría de los aspectos de la actividad económica de Rhodesia del Sur. El 8 de marzo de 1966, se incorporaron a las enmiendas a la ley de poderes de emergencia de 1960 las nuevas disposiciones sobre cen-

sura, control de la fuerza de trabajo y corporaciones. En términos generales, esas disposiciones incluyen:

1) Control de las personas que se emplean en algún comercio, negocio, ocupación, profesión, asunto o industria o se dedican a ello en Rhodesia, y reglamentación de esas actividades.

2) Posesión o control en nombre del Gobierno de toda propiedad o empresa.

3) Control de las personas y de las corporaciones que se dedican a los negocios en Rhodesia, y reglamentación de sus actividades.

4) Adquisición en nombre del Gobierno de todo bien distinto de las tierras.

5) Allanamiento y registro de locales de todo tipo.

6) Pagos de compensación y remuneración a las personas afectadas por toda disposición tomada u ordenada conforme a esta sección.

Se prevé un castigo máximo de 500 libras de multa o dos años de prisión, o ambas cosas, por quebrantamiento de esas disposiciones.

Cosecha de tabaco de Rhodesia del Sur

637. Las cifras del comercio del Reino Unido indican que las importaciones de tabaco de Rhodesia del Sur en el Reino Unido ascendieron a 2.460.000 libras esterlinas en enero de 1966, mientras el promedio mensual de los años anteriores era de 1.266.000 libras.

638. Se mencionó el 3 de marzo de 1966 que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido había dicho que el tabaco de Rhodesia del Sur importado por el Reino Unido en enero había sido comprado y enteramente pagado por los importadores del Reino Unido antes que se declarara ilegalmente la independencia en noviembre de 1965.

639. Con arreglo a las cuentas del comercio de ultramar del Reino Unido correspondientes a febrero de 1966, las importaciones británicas de Rhodesia del Sur ascendían a 523.000 libras, de las cuales 484.000 correspondían a las importaciones de tabaco. Quedaba, pues, un saldo de 39.000 libras sin justificar. Se declaró que el tabaco se había importado en enero, pero que los documentos no se habían tramitado hasta febrero.

640. Para contrarrestar la decisión del Gobierno del Reino Unido de prohibir la venta y la compra de tabaco de Rhodesia del Sur, las autoridades ilegales sometieron el 4 de marzo de 1966 las secciones de empaquetamiento y compra de la industria tabacalera al reglamento de control de emergencia de la mano de obra. La reglamentación de la mano de obra tiene por objeto facultar a las autoridades ilegales para que impidan que las compañías despidan empleados; y puedan impedir a los empleados que dimitan o salgan del país sin permiso. Las nuevas disposiciones referentes a la industria del tabaco también impedían a los miembros de la industria el revelar información sobre las ventas de tabaco que habían de empezar el 29 de marzo de 1966. Las personas que quebrantan los reglamentos están sujetas a una multa de 500 libras o a dos años de prisión, o ambas cosas.

641. A fines de marzo de 1966, los principales compradores del tabaco de Rhodesia del Sur, es decir el Reino Unido, la República Federal de Alemania, el Japón, el Benelux, los países escandinavos y Australia, anunciaron que no iban a comprar más tabaco a Rho-

desia del Sur mientras el país estuviera sometido al régimen de Smith. Con arreglo a las cifras del comercio de 1964, más del 90% del tabaco de Rhodesia del Sur estaba ya bajo embargo de los países importadores antes de la subasta de la cosecha de 1966. La principal salida que todavía queda para la exportación de tabaco es la de Sudáfrica. En 1964, el tabaco bruto representaba un valor de 39.221.735 libras, o sea el 32,83% del valor total de las exportaciones internas, o el 28,53% de las exportaciones internas y reexportaciones de Rhodesia del Sur.

642. La cosecha de tabaco de 1966 se calcula en 200 a 240 millones de libras de peso. La Corporación de Tabaco del Estado se ocupa de la venta del tabaco este año. El 24 de marzo de 1966, el Ministerio de Agricultura publicó una lista de precios de reserva de las distintas calidades de tabaco. En la cosecha se establecen 273 calidades, cuyos precios oscilan de 1 penique a 48 peniques. En el anuncio se subrayó que esos precios eran los que se iban a pagar a los cultivadores y que no representaban el precio de venta a los comerciantes en tabaco (véanse los párrafos 236 a 238, *supra*). Por término medio, los precios serían de unos 26 peniques (alrededor de 31 centavos de los EE. UU.) la libra. El precio medio de la hoja de Rhodesia del Sur fue el año pasado de 33 peniques (unos 39 centavos) la libra. El tabaco que no se vendiera en el mercado libre lo compraría la Corporación a los precios de reserva. En general esos precios son más elevados de lo que se esperaba y se calcula que aseguran a los cultivadores de tabaco entre 20 millones y 25 millones de libras, según sea la cosecha. Se anunció, además, que esa cantidad sería suficiente para cubrir el costo de la producción de toda la cosecha corriente, aunque era probable que algunos cultivadores perdieran esta temporada si no se les pagaba por su tabaco más que los precios de apoyo.

643. El 25 de marzo de 1966, el Gobierno del Reino Unido volvió a prevenir a los compradores de tabaco del mundo para que no participaran en la subasta de tabaco que había de comenzar en Salisbury el 29 de marzo de 1966. El aviso lo dio el Sr. Arthur Bottomley, Secretario de Relaciones con el *Commonwealth*. Por decreto (*Order-in-Council*), de 7 de febrero de 1966, el Gobierno del Reino Unido declaró delito, en el Reino Unido y en Rhodesia del Sur, el exportar tabaco de este país. El decreto prohíbe, no sólo exportar tabaco, sino también venderlo dentro de Rhodesia del Sur con miras a su exportación.

644. El 26 de marzo de 1966, el Presidente del Consejo de Exportación y Fomento del Tabaco, Sr. John Graylin, declaró que el Gobierno del Reino Unido ya había perdido la guerra del tabaco. En una alocución que pronunció ante el decimocuarto congreso anual de la Asociación Rhodesia de Periodistas, declaró que las esperanzas del Reino Unido de reducir a Rhodesia del Sur a la impotencia en los próximos meses se habían esfumado. Señaló que, a breve plazo, Rhodesia del Sur había ganado la guerra del tabaco dividiendo las ventas entre internas y externas. Las ventas internas iban a beneficiar a los cultivadores inmediatamente, pero las ventas externas representaban una perspectiva a largo plazo que no se iba a poder tomar a la ligera. El Sr. Graylin manifestó que — tanto si las subastas tenían éxito como si, de no tenerlo, la Asociación tabacalera había de comprar toda la cosecha — los cultivadores iban a percibir, por lo menos, el precio de producción de su cosecha.

645. Las ventas de tabaco de Rhodesia del Sur empezaron en Salisbury el 29 de marzo de 1966. El 30 de marzo de 1966, en los medios tabacaleros se dijo que, por razones de seguridad, se había decidido la noche del 29 de marzo sustituir el sistema de subasta por el de negociación privada. El comprador habría de decidir la calidad de tabaco que deseaba y hacer entonces una oferta a la Corporación del Tabaco. Se señaló que eso era otra disposición más para proteger la identidad de los compradores extranjeros. El Presidente de la Asociación Rhodesia del Tabaco, Sr. Carol Heurthley, manifestó que las ventas mediante tratos entre particulares era estrictamente un asunto de conveniencia y no iban a continuar así toda la temporada.

646. Cuando empezó la subasta de tabaco el 29 de marzo de 1966, se protegió con gran celo con un cordón de guardias especiales y policía un enorme edificio de las afueras de Salisbury donde se efectuaban las subastas. Durante la celebración de la subasta, se declaró a los edificios lugares protegidos en virtud de las medidas de emergencia. Sólo los compradores y los funcionarios autorizados pudieron penetrar en ellos y, en consecuencia, nadie más que los compradores y los funcionarios de la Corporación del Tabaco pudieron saber si se vendía tabaco y cuánto se vendía.

647. El 17 de abril de 1966, la Junta de Comercialización del Tabaco de Rhodesia anunció que los cultivadores podían aumentar en un 25% sus entregas semanales de tabaco para la venta en subasta en Salisbury. Se anunció que el aumento de la cuota dio lugar a una especulación considerable de que Rhodesia del Sur estaba vendiendo su cosecha de 1966 a pesar de las sanciones internacionales. Otras fuentes también sugirieron que eso podía significar que la cosecha de tabaco había resultado más abundante de lo que se esperaba y que el "Gobierno" estaba ansioso de pagar lo antes posible a los cultivadores a los precios básicos garantizados el tabaco entregado, de manera que los cultivadores pudieran, a su vez, cumplir con algunas de las obligaciones que habían contraído con entidades bancarias y comerciales.

648. El 19 de abril de 1966, la Junta de Comercialización del Tabaco de Rhodesia anunció también los precios de reserva para el tabaco "burley". Oscilaban entre 1 penique y 47 peniques y medio la libra, y abarcaban una amplia gama de calidades de tabaco. Se subrayó en el anuncio que esos precios iban a servir de base para pagar a los cultivadores y no representaban los precios a que se iba a vender el tabaco a los comerciantes.

649. Como ya se ha indicado, debido al cordón de seguridad con que se rodearon las ventas de tabaco, resultó imposible averiguar si se había vendido tabaco y, de ser así, cuánto. Sin embargo, se dijo que algunos comerciantes podían tratar de exportar el tabaco de Rhodesia del Sur pasando por Sudáfrica y disimulándolo como si fuera hoja sudafricana, aunque los expertos podían distinguir el tabaco de los dos países. Sudáfrica podía, incluso sin reexportar tabaco rhodesio, decidir importar más tabaco rhodesio para satisfacer sus propias necesidades y, a su vez, exportar más de su propia cosecha.

650. Normalmente, Sudáfrica sólo importa 2 millones de libras de tabaco rhodesio por año. Según las noticias que se tienen, en Sudáfrica no se prevé este año más que una cosecha de 59 millones de libras, lo

que ha de aumentar las probabilidades de importar tabaco de Rhodesia del Sur. Las existencias habían quedado reducidas a un mínimo (había 67 millones de libras en agosto pasado), lo que dejaba margen para reponer existencias.

Cosecha de azúcar de Rhodesia del Sur en 1966

651. El 17 de marzo de 1966, el Gobierno del Reino Unido anunció que prohibía la exportación de azúcar de Rhodesia del Sur. Con arreglo al decreto, que rige tanto en el Reino Unido como en Rhodesia del Sur, es actualmente "ilegal que los especuladores u otras personas compren azúcar de Rhodesia y lo guarden en Rhodesia o en cualquier otro país con la esperanza de venderlo con beneficio cuando se restablezca un gobierno legítimo", y los que compren ahora azúcar rhodesio no adquirieren el título de propiedad sobre el mismo y no van a poder recuperar el dinero. Es más, todas las transacciones efectuadas en Rhodesia del Sur con miras a la exportación del azúcar carecen de validez, tanto si la exportación se ha de efectuar inmediatamente como si se ha de efectuar más adelante.

652. La industria azucarera de Rhodesia del Sur casi se ha decuplicado durante los últimos seis años. La cosecha de 1965, antes de la declaración ilegal de independencia, se calculó que era de 250.000 toneladas. Se esperaba llegar a las 350.000 toneladas en 1966. El azúcar se cotizaba en el mercado mundial a unas 20 libras por tonelada.

653. Los principales compradores de azúcar de Rhodesia del Sur, a saber los Estados Unidos, el Canadá y el Reino Unido, ya han declarado el embargo a las importaciones de azúcar de Rhodesia del Sur. Las autoridades del Reino Unido esperaban que Zambia y Malawi, que dependían de Rhodesia del Sur para obtener azúcar, cooperarían en esa prohibición.

654. Se informa que ocho casas comerciales japonesas han contratado la compra de 50.000 toneladas de azúcar de Rhodesia del Sur, que valen 1 millón de libras aproximadamente. En el Japón, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria declaró el 21 de marzo de 1966 que esas transacciones constituían la única excepción a la prohibición de importar azúcar, que el Japón había anunciado a fines de enero de 1966. Los contratos sobre el azúcar se habían celebrado antes de la declaración ilegal de independencia; y el Reino Unido tenía conocimiento de esos contratos desde diciembre de 1965. El Ministerio de Comercio Internacional e Industria declaró que quizás se aplazara el embarque de azúcar previsto para abril. La realidad es que, al 22 de abril de 1966, el contrato seguía en pie.

Industria minera

Cromo

655. El 25 de febrero de 1966, un portavoz del Ministerio de Comercio del Reino Unido confirmó que se había concedido un permiso a una firma de dicho país para que importara una "partida" de mineral de cromo de Rhodesia del Sur después del decreto del 20 de enero que prohíbe esas operaciones. El portavoz explicó que la partida se había comprado y pagado antes de la entrada en vigor del decreto y que ya estaba en un almacén en Beira para ser embarcada. Según el Ministerio de Comercio, aunque con posterioridad al 20 de enero se habían enviado al Reino Unido unas 9.000 to-

neladas de mineral de cromo de gran riqueza, las remesas habían sido perfectamente legales.

656. Según los cálculos del Reino Unido, se han enviado a los Estados Unidos entre 15.000 y 17.000 toneladas de cromo desde la declaración ilegal de independencia, pero, igual que sucede con las remesas al Reino Unido, dichas cantidades estaban ya fuera de Rhodesia del Sur cuando la prohibición entró en vigor.

657. El 28 de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el Gobierno del país había pedido a todos los importadores norteamericanos de cromita de Rhodesia del Sur que se atuvieran al decreto del Gobierno del Reino Unido por el que se prohibía la exportación de cromo de Rhodesia del Sur.

658. Acerca de la República Federal de Alemania, cabe señalar que el cromo todavía no se ha incluido en la lista de artículos de Rhodesia del Sur para cuya importación no se conceden permisos²⁴.

Cobre

659. El 3 de marzo de 1966, el "Subsecretario de Minas" de Rhodesia del Sur, Sr. Dillon, declaró en una entrevista que, probablemente, se iban a abrir tres minas más de cobre en la región norte de Rhodesia del Sur en el transcurso de los próximos doce meses. La producción anual de cobre de Rhodesia del Sur es de unas 24.000 toneladas. El Sr. Dillon declaró que el "Ministerio de Minas" estaba tratando de alcanzar una producción de 30.000 toneladas en el espacio de dos años. Si se llega a esa cantidad, habrá que prever la posibilidad de instalar una refinería de cobre. Ya se ha estado considerando el lugar donde se podría instalar la refinería y se espera que ello conduzca a otra industria, la de producción de tuberías, láminas y otros productos de cobre.

660. El Sr. Dillon también declaró que las sanciones no iban a afectar a las ventas de cobre de Rhodesia del Sur. La importancia que está adquiriendo ahora la extracción de cobre en Rhodesia del Sur se debe simplemente a la demanda y al valor del producto.

661. La República Federal de Alemania todavía no ha incluido el cobre en la lista de productos de Rhodesia del Sur cuya importación está prohibida. Se informa que la República Federal de Alemania ha gastado 3.300.000 libras en cobre de Rhodesia del Sur durante los primeros nueve meses de 1965.

Mineral de hierro

662. El Gobierno japonés anunció a fines de enero que quedaba prohibido importar hierro en bruto de Rhodesia del Sur²⁵. En 1964, el Japón importó hierro bruto rhodesio por valor de 2.400.000 libras, lo cual representaba casi el 85% de la producción de la Southern Rhodesian Iron and Steel Corporation (RISCO). Las autoridades de Rhodesia del Sur han declarado a la RISCO "industria de interés preferente" con objeto de evitar que la compañía cierre; y han decretado el control de la mano de obra para evitar los despidos. La RISCO ha cerrado dos de sus tres altos hornos y uno de sus hornos de acero de solera abierta y ha desistido de realizar un plan de ampliación y

²⁴ *Ibid.*, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966, documento S/7181.

²⁵ *Ibid.*, documento S/7114.

modernización que iba a costar 7 millones de libras. Se informa que, como resultado de ello, sobran unos 400 obreros, entre los cuales hay 100 europeos.

663. El 2 de febrero, se informó en Salisbury que la compañía japonesa de aceros Kobe, en la que el Estado japonés tenía un 20% de las acciones, había comunicado que iba a cerrar su mina de hierro en Rhodesia del Sur. Se dice que esta mina produce 350.000 toneladas de mineral por año.

664. El 13 de abril de 1966, el Gobierno del Reino Unido declaró ilegal la exportación de mineral de hierro de Rhodesia del Sur. Se tomaron las disposiciones pertinentes el 7 de abril y la prohibición fue efectiva el 13. En virtud del instrumento legal correspondiente, es ahora un delito, tanto en el Reino Unido como en Rhodesia del Sur, el exportar mineral de hierro de Rhodesia del Sur.

665. Aunque el Japón había prohibido la importación de hierro en bruto de Rhodesia del Sur a fines de enero de 1966, se extendieron permisos ulteriormente para importar por lo menos 84.000 toneladas de mineral de hierro que valen unas 250.000 libras. Según el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, esas importaciones se han efectuado en virtud de contratos celebrados antes de la declaración unilateral de independencia.

666. El 14 de abril de 1966, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria del Japón celebró consultas con los representantes de la industria del acero para examinar la situación que se planteaba con el embargo que el Reino Unido había impuesto a las exportaciones de mineral de hierro de Rhodesia del Sur. Se informó que las acerías habían convenido en suspender de momento las importaciones.

Asbesto

667. En abril de 1966, los industriales de la República Federal de Alemania todavía importaban asbesto de Rhodesia del Sur alegando que el buscar otras fuentes de suministro de esa materia prima les acarrearía unos gastos suplementarios muy grandes.

668. También parece que el Japón tenía al 21 de marzo de 1966 unas autorizaciones pendientes para importar asbesto de Rhodesia del Sur. El asbesto no figura en la lista de productos de Rhodesia del Sur cuya importación está prohibida pero está abarcado por un sistema general de permisos a que se sujeta la importación de productos de Rhodesia del Sur.

Oro

669. Según el *Overseas Review*, de abril de 1966, del Barclays Bank, D. C. O., la Anglo-American Corporation ha abierto tres pozos nuevos en las minas que tiene en la zona aurífera de Felixburg, cerca de Umvuma. Otro pozo, en la mina de Tchagwa, que había sido abandonado hace unos cuantos años debido a las dificultades que se planteaban con el agua, se ha profundizado y se está poniendo en explotación. Se supone que a Rhodesia del Sur no le resulta difícil dar salida a su producción de oro, que fue de 7.200.000 libras en 1964.

Otros acontecimientos en materia de comercio e industria

670. Según una noticia publicada el 4 de marzo de 1966 en un periódico sudafricano el Director del Cen-

tro de Coordinación del Comercio y la Industria de Salisbury, Sr. W. Livesey, había declarado haber recibido, de varios países extranjeros, cuantiosos pedidos de mercancías de Rhodesia del Sur. En la lista figuraban 3 millones de toneladas de semilla de soja, cantidades ilimitadas de semillas de girasol, 100.000 toneladas de sorgo, 100.000 toneladas de maíz, 50.000 toneladas de semillas de algodón, unos 4 millones de yardas de tela de algodón para sábanas, y "toda la producción que podamos lograr de bismuto, cobre, plata, zinc, plomo y otros minerales". Estos pedidos procedían de países de Europa y América, así como del Oriente Medio y Lejano. Algunos eran de países que, nominalmente, apoyaban la prohibición de comerciar con Rhodesia.

671. Según la noticia, el Sr. Livesey había dicho también que algunos de esos países estaban incluso dispuestos a invertir capital en la industria de Rhodesia del Sur; casi todas las empresas locales establecidas en Rhodesia del Sur y dispuestas a diversificar y ampliar sus actividades eran filiales de compañías británicas.

672. El 18 de marzo de 1966, y con motivo de la reunión anual de la Cámara de Comercio de Fort Victoria, el Sr. Ian Smith pronunció un discurso en el que manifestó que Rhodesia del Sur había salvado hasta la fecha las sanciones del Reino Unido y capeaba el temporal mucho mejor de lo que se había previsto. El país podía mirar al porvenir con optimismo y confianza siempre que sus asuntos se manejasen prudentemente. El Sr. Smith comprendía la pesada carga que soportaba el sector comercial de la economía. La industria y el comercio habían salido airoso en el frente interno y, si esto se reflejaba en otros sectores, se ganaría la guerra contra las sanciones y se podrían gozar los frutos de la victoria. De momento, Rhodesia del Sur tenía problemas, e indudablemente surgirían otros antes que se resolviese la cuestión planteada.

673. El 15 de marzo de 1966, se dio la noticia de que, según datos de la Oficina Central de Estadística de Salisbury (algunas de las pocas estadísticas que aún se publican), la matrícula de nuevos vehículos de pasajeros en enero de 1966 fue inferior en un 38% a la de enero de 1965 y arrojó la cifra mensual más baja registrada en cuatro años por lo menos.

674. En una declaración formulada el 17 de marzo de 1966 en Bulawayo, el "Ministro de Comercio e Industria", Sr. B. Musset, invitó a los vendedores locales al por menor a comprar en lo posible mercancías de Rhodesia del Sur, y manifestó al mismo tiempo cuánto sentía que muchas sociedades fijasen períodos muy cortos al contratar pedidos a la industria local, dando así la impresión de estar muy deseosas de volver a emplear artículos de importación en cuanto se levantasen las sanciones.

675. El Sr. Musset declaró asimismo que el comercio nacional de vehículos automotores — uno de los más afectados por las sanciones, según se decía — no resolvería sus problemas hasta que terminara el racionamiento de la gasolina. Preveía asimismo que muchas empresas del ramo tendrían que reducir sus actividades, pero era importante, dijo, conservar en el país a los trabajadores calificados.

676. El 31 de marzo de 1966, el régimen ilegal hizo extensivas a cuatro de las principales plantas de montaje de vehículos automóviles de Rhodesia del Sur las medidas de control de la mano de obra.

677. El 3 de abril de 1966, el Presidente de las Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia, Sr. Hughes, declaró en Johannesburgo que las sanciones contra Rhodesia del Sur no estaban quebrantando la economía del país, sino que ayudaban a crear un mercado interno mayor para las manufacturas de producción local. El desempleo no había llegado a niveles graves, aunque sí que había cierto desempleo y escaseaban los trabajadores calificados. Manifestó asimismo que los industriales de Rhodesia del Sur deseaban aumentar sus exportaciones a Sudáfrica para recuperar parte de la pérdida de su comercio con Zambia.

678. El 5 de abril de 1966, en otra declaración formulada en Johannesburgo, el Sr. Hughes dijo que el éxito que Rhodesia del Sur había alcanzado a pesar de las sanciones superaba con mucho las esperanzas más optimistas de los comerciantes del país cuatro meses antes. La moneda de Rhodesia del Sur se mantenía fuerte; las exportaciones continuaban en un alto nivel, y seguían entrando nuevos suministros. Desde la "independencia" había en el país enormes y nuevas oportunidades para las inversiones y el desarrollo y seguían estableciéndose nuevas empresas comerciales. La economía de Rhodesia del Sur podría requerir a la larga sus rectificaciones, pero no quedaría arruinada.

679. En el número de abril de 1966 del *Overseas Review* del Barclays Bank, D. C. O., apareció un estudio sobre la economía de Rhodesia del Sur. Según ese estudio, fuera del distrito de Fort Victoria, la situación del comercio minorista de Rhodesia del Sur durante los meses de febrero y marzo reflejaba una tendencia al alza, experimentándose en los grandes almacenes un movimiento satisfactorio en casi todos los departamentos. El comercio al por mayor, tradicionalmente tranquilo en esa época del año era satisfactorio, con ligero aumento de la actividad en Bulawayo y movimiento generalmente favorable en comparación con el período correspondiente de 1965.

680. El estudio del Barclays Bank se refería también a ciertas novedades industriales, de poca importancia, destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores locales, pero no aludía a los suministros de petróleo ni a las ventas de tabaco.

Situación en materia de empleo

681. Aunque no se dispone de estadísticas oficiales, las noticias periódicas indican que el número de europeos que han perdido su empleo como resultado de las sanciones económicas y financieras pudiera ser de más un millar, pero que se trata de casos aislados. Sin embargo, se decía que habían sido despedidos muchos africanos. En un discurso pronunciado ante la Cámara de Comercio de Fort Victoria el 18 de marzo de 1966, el Sr. Ian Smith declaró que a quienes más habían afectado las sanciones del Reino Unido y de otros países extranjeros había sido a los africanos de Rhodesia del Sur.

682. El 6 de abril de 1966, el "Ministro de Trabajo", Sr. McLean, declaró que el "Gobierno" estaba creando puestos de trabajo. Agregó que, desde el mes de diciembre último, 274 europeos habían entrado en la administración pública. Dijo asimismo que 1.200 egresados de escuelas y otros 300 egresados de escuelas europeas, asiáticas y de color habían encontrado puestos de trabajo en la empresa privada. En lo que va de año, agregó el "Ministro", la bolsa de trabajo del Gobierno había encontrado empleo a más de 8.000 personas.

683. El desempleo se ha contenido bastante, al menos temporalmente, haciendo extensivas a algunos sectores de la economía las medidas de control de la mano de obra, que permiten al régimen ilegal impedir que las compañías despidan a sus empleados y que éstos renuncien a sus cargos y salgan del país sin permiso. En abril de 1966, estas medidas se habían hecho extensivas a todas las compañías petroleras en la CAPREF, las industrias del estaño y las siderúrgicas, la industria del tabaco y casi todas las plantas de montaje de vehículos automotores de Rhodesia del Sur. También la *Emergency Powers (Industrial Relations) Act*, de 23 de febrero de 1966, concede al "Ministro de Trabajo" el derecho de suspender, a petición de los empleadores, determinadas disposiciones de los convenios industriales concertados de conformidad con la *Industrial Conciliation Act*. Esa facultad abarca el comercio y la industria en la mayoría de sus aspectos, pero no la agricultura ni los ferrocarriles. Los empleadores pueden pedir ahora la modificación de condiciones relativas a las horas de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo, las vacaciones y la remuneración establecida en los actuales convenios. La finalidad es permitir que los patronos modifiquen temporalmente las condiciones de empleo, en vez de despedir a los trabajadores. Se dice que algunas industrias han reducido desde entonces las horas de trabajo para proteger a los trabajadores de las consecuencias de la contracción, pero no se dispone de datos precisos al respecto.

Acontecimientos conexos en materia de finanzas y comercio

684. La Tesorería y el Banco de Reserva de Rhodesia del Sur proporciona a la Tobacco Corporation un crédito estimado en 20-25 millones de libras esterlinas para financiar la compra de la cosecha de tabaco. En parte, la asignación de esta suma, pese a las restricciones crediticias impuestas por el Reino Unido, ha sido posible gracias a que Rhodesia del Sur dispone de 10-13 millones de libras esterlinas, en un año completo, como resultado neto del bloque mutuo de pagos de intereses, dividendos y utilidades entre el Reino Unido y Rhodesia del Sur.

685. Conforme a una declaración publicada el 15 de marzo de 1966 por el "Ministerio de Hacienda", a las seis semanas de la emisión se llevaban vendidas cerca de 600.000 libras esterlinas de "bonos de independencia" emitidos por el régimen el 2 de febrero de 1966. Esta cifra no tiene precedentes en ninguna de las ventas anteriores de certificados de ahorro. Conforme a esa declaración, al 15 de marzo de 1966 se había suscrito plenamente un empréstito a plazo medio, de 5 millones de libras, emitido por el Gobierno el 28 de febrero.

686. Se ha dicho también que, como resultado de estos hechos, la presión crediticia que se temía ejercerían las sanciones económicas del Reino Unido sobre la financiación de la cosecha de tabaco no ha dado tan rápido resultado como se esperaba, si bien los bancos comerciales se hallan aún en una situación bastante estrecha.

687. El 18 de abril de 1966, el "Ministro de Comercio e Industria", Sr. B. Musset, declaró en Bulawayo que el sector comercial debía tratar de ayudar al agrícola facilitando crédito, para salvar los períodos difíciles, a los agricultores víctimas de las sanciones o

de la sequía. Instó asimismo al sector comercial a no renunciar a sus exclusivas en relación con la maquinaria y el equipo procedentes del Reino Unido, pues ello podría hacer que la agricultura se viese privada de repuestos esenciales. El 19 de abril de 1966, el Sr. John Hughes, Presidente de las Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia, respondió que el sector comercial por sí no estaba en situación de encargarse de la comunidad agrícola porque también le habían afectado las restricciones crediticias, así como el esfuerzo nacional por retener a los empleados a pesar de la reducción de las utilidades y del poco movimiento comercial.

688. En un discurso pronunciado el 29 de abril de 1966 al inaugurar en Bulawayo la Feria Comercial Centroafricana, el Sr. Smith declaró que Rhodesia del Sur venía manteniendo una balanza comercial favorable desde la "independencia", y que, contra lo predicho por los pesimistas, la libra rhodesiana no se había devaluado. Desde la "independencia", el "Gobierno" había facilitado a los industriales divisas para más de 50 proyectos.

689. El Sr. Smith dio también información económica no publicada antes. El valor de la producción mineral del último año, dijo, alcanzaba la cifra sin precedentes de 32 millones de libras esterlinas, y las tendencias registradas durante el primer trimestre de 1966 sugerían que esta cifra sería superada. Las exportaciones de productos manufacturados sumó 65 millones de libras esterlinas en 1965, con lo que también se establecía una nueva marca. El Sr. Smith reconoció que el índice de la producción manufacturera había bajado un 5% en febrero de 1966 a causa de las sanciones. Los planes de construcción aprobados por las autoridades locales en enero y febrero de 1966 llegaban a una cifra superior en 50.000 libras esterlinas a la del mismo mes del año anterior. El 65% de esta suma correspondía a viviendas.

Relaciones económicas con Sudáfrica

690. El 1º de marzo de 1966, el *Johannesburg Star* citaba el último número del *Journal of the South African Foreign Trade Organization*, que publicaba un estudio sobre las exportaciones sudafricanas a Rhodesia del Sur. Según ese estudio, Sudáfrica podía suministrar a Rhodesia del Sur casi todo lo que ésta había estado importando del Reino Unido, país del que procedieron en 1964 el 30% de las importaciones de Rhodesia del Sur. Sin embargo, los pagos de los importadores de Rhodesia del Sur por mercancías importadas de Sudáfrica planteaban un problema potencial, toda vez que casi el 45% del producto nacional bruto de Rhodesia del Sur lo representaban las exportaciones.

691. Según ese estudio, no había noticias de que los exportadores sudafricanos tropezasen con dificultades para cobrar sus productos. El seguro sobre las exportaciones de mercancías vendidas a crédito a Rhodesia del Sur no era más costoso que antes de la declaración unilateral de independencia. Por otra parte, continuaba el artículo, el crédito concedido por los exportadores sudafricanos sólo continuaría, probablemente, en tanto que hubiera posibilidad de cobrar dentro de un plazo razonable. Este punto podría ser decisivo en las relaciones comerciales entre Sudáfrica y Rhodesia del Sur durante los próximos meses.

692. El 2 de marzo de 1966, el *Cape Times* informó que los exportadores sudafricanos habían llenado

el vacío comercial causado por la prohibición de las exportaciones a Rhodesia del Sur impuesta por el Gobierno del Reino Unido. Las exportaciones de manufacturas a Rhodesia del Sur habían aumentado repentinamente durante los dos primeros meses de 1966 y se esperaba que la tendencia continuase. Sin embargo, los Gobiernos de Rhodesia del Sur y de Sudáfrica habían impuesto una prohibición estricta sobre la revelación de todo dato relativo al volumen y valor de las operaciones comerciales. Según la noticia publicada, tanto los funcionarios del Departamento sudafricano de Comercio e Industria como los de la Oficina de los Rhodesia Trade Commissioners (Comisionados comerciales de Rhodesia) en Johannesburgo se habían negado a comentar el incremento comercial. Según las noticias publicadas, las autoridades de Rhodesia del Sur habían declarado que los fabricantes sudafricanos llenaban adecuadamente el vacío dejado por los fabricantes británicos a causa del boicoteo.

693. El 8 de marzo de 1966 se anunció que los fabricantes de Rhodesia del Sur habían formado una asociación para iniciar una campaña de exportación a Sudáfrica. Los fabricantes concedores de la coyuntura y de la demanda existentes en Sudáfrica habían convenido en reunir su información y en facilitarla a la industria manufacturera de Rhodesia del Sur en general.

694. Se había designado secretarios de la Asociación, denominada Rhodesia Export Association, en Salisbury, Bulawayo y Johannesburgo y se habían establecido servicios de almacenamiento en Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban, Port Elizabeth, East London y Pietersburgo. La Asociación proporcionaría a los fabricantes de Rhodesia del Sur datos sobre las posibilidades del mercado, medios de transporte, almacenes, aduana y problemas arancelarios y ayudaría a arreglar campañas de comercialización.

695. El 3 de abril de 1966, una delegación de cinco hombres de negocios de Rhodesia del Sur, encabezada por el Presidente de las Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia, Sr. Hughes, llegó a Johannesburgo para asistir en esa ciudad a los Festejos de la República. A su llegada, el Sr. Hughes declaró que los industriales de Rhodesia del Sur deseaban aumentar sus exportaciones a Rhodesia del Sur a fin de recuperar una parte de la pérdida de su comercio con Zambia. El 5 de abril de 1966, el Sr. Hughes declaró asimismo en Johannesburgo que Sudáfrica y Rhodesia del Sur eran económicamente más interdependientes ahora que nunca. Hablaba en su carácter de jefe de la misión comercial de Rhodesia del Sur que asistía a las Fiestas Pascuales del Rand. La visita tenía por objeto dar a los hombres de negocios sudafricanos y a otros interesados información práctica sobre la situación económica de Rhodesia del Sur y rectificar todo error que pudiera haber acerca de las oportunidades existentes para el comercio entre los dos países.

Relaciones económicas con Portugal

696. El 23 de febrero de 1966, se informó de Salisbury que una delegación comercial de Rhodesia del Sur había partido secretamente para Angola con el propósito de celebrar conversaciones con el Gobierno portugués. Las conversaciones, se decía, eran una continuación de las reuniones celebradas el año último a raíz de la firma de un acuerdo comercial entre Rhodesia del Sur y Portugal. En el acuerdo comercial, con-

certado por un período inicial de cinco años, los signatarios se comprometieron a conceder a los productos de uno y otro país el trato de "nación más favorecida".

697. El 17 de marzo de 1966 se anunció en Lisboa que Portugal había aceptado a título experimental la entrega de 133 toneladas de carne de Rhodesia del Sur y que decidiría si deseaba o no comprar más carne después de medir el éxito y la utilidad comercial del producto de Rhodesia del Sur.

698. El 6 y el 8 de abril de 1966, el Gobierno de Portugal publicó en la prensa dos comunicados en los cuales reiteraba su posición de mantener abiertos los servicios de tránsito de Mozambique a Zambia, Malawi y Rhodesia del Sur. En esos comunicados, declaraba que no intervendría en lo referente a los productos destinados a cualquiera de esos países (véanse los párrafos 715 y 716, *infra*).

Rhodesia del Sur y las sanciones económicas internacionales

699. Según cálculos del Gobierno del Reino Unido, en marzo y abril de 1966 las exportaciones de Rhodesia del Sur se habían visto reducidas en un 60% (respecto de las cifras correspondientes a 1964) gracias a las sanciones internacionales. La mayoría de los países que sostenían normalmente relaciones comerciales de mayor volumen con Rhodesia del Sur habían prohibido la importación de todos los artículos procedentes de Rhodesia del Sur, o de la mayoría de ellos. En 1964 el valor de las exportaciones de productos de Rhodesia del Sur ascendió a 119.465.000 libras. El 60% de las exportaciones de Rhodesia del Sur afectadas por las sanciones incluían tabaco, azúcar, asbesto, cromo, litio, ferroleaciones, pieles y cueros, carnes, hierro en bruto, acero y cobre.

700. Sudáfrica, que no participa en las sanciones, importó en 1964 mercancías producidas en Rhodesia del Sur por valor de 9 millones de libras esterlinas. Portugal, que tampoco participa en las sanciones, importó en 1964 mercancías producidas en Rhodesia del Sur por valor de 700.000 libras esterlinas. Se ha calculado que en 1964 Angola y Portugal importaron mercancías producidas en Rhodesia del Sur por valor de 225.000 y 380.000 libras esterlinas, respectivamente.

701. Las importaciones de Zambia de productos de Rhodesia del Sur en 1964 se valoraron en 31 millones de libras esterlinas; la mayor parte de estas importaciones consistió en artículos fundamentales para la economía nacional. Para abril de 1966, estas importaciones habían ido disminuyendo a un ritmo que se calcula en el 30% (o sea, 10 millones de libras al año) a raíz del llamamiento dirigido por el Gobierno a los importadores locales para que encontrasen otras fuentes de abastecimiento. Malawi — que se encuentra en situación análoga a la de Zambia, dado que los productos que importa de Rhodesia del Sur son fundamentales para su economía — también importó en 1964 mercancías producidas en Rhodesia del Sur por un valor de 5.600.000 libras esterlinas. El Gobierno de Malawi también ha dirigido un llamamiento a los importadores locales para que encuentren otras fuentes de abastecimiento. (Véanse los párrafos 305 a 330, *supra*.) No se dispone de cifras corrientes acerca de los efectos de este llamamiento sobre el comercio entre los dos países. Se ha comunicado que la República Democrática del Congo, que también importa de Rhodesia del Sur

productos esenciales, se encuentra en situación análoga a la de Zambia y Malawi, aunque el 1° de febrero de 1966 anunció su intención de suspender todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur. En 1964, las exportaciones de productos de Rhodesia del Sur a la República Democrática del Congo alcanzaron un valor de 1.500.000 libras esterlinas.

702. Bechuania, que sufre graves dificultades económicas causadas por una pertinaz sequía, importó en 1964 productos de Rhodesia del Sur por valor de 700.000 libras esterlinas. No se dispone de cifras relativas a la medida en que este comercio se ha visto afectado por las sanciones.

703. El Japón ha impuesto sanciones sobre el 75% de sus importaciones de Rhodesia del Sur (según las cifras correspondientes a 1964). En 1964, el Japón importó mercancías producidas en Rhodesia del Sur por valor de 5.500.000 libras. El 3 de diciembre de 1965 Japón informó al Secretario General²⁶ que era su política no importar más tabaco ni azúcar de Rhodesia del Sur con excepción del azúcar cuya importación se había contratado con anterioridad a la declaración unilateral de independencia. El 1° de febrero de 1966, el Japón comunicó también al Secretario General²⁷ que no seguiría importando hierro en bruto de Rhodesia del Sur; que, en lo sucesivo, todas las importaciones procedentes de Rhodesia del Sur estarían condicionadas a la obtención de una licencia de importación del Gobierno del Japón; y que ya se habían adoptado al respecto todas las medidas jurídicas necesarias.

704. Se ha comunicado que, según funcionarios japoneses, las medidas anunciadas a fines de enero de 1966 no afectaban al azúcar ni al mineral de hierro cuya importación se había negociado antes de la declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, y con posterioridad a la adopción de sanciones, el Japón ha concedido licencias para la importación de un mínimo de 84.000 toneladas de mineral de hierro por valor de 250.000 libras esterlinas. La mayor parte de las exportaciones de mineral de hierro de Rhodesia del Sur van al Japón. Se ha comunicado que dichas importaciones han seguido teniendo un volumen muy elevado después de la declaración unilateral de independencia. Además, el Japón tiene pendiente un contrato por 50.000 toneladas de azúcar de Rhodesia del Sur, lo que representa un valor de un millón de libras esterlinas, aproximadamente. El Japón anunció nuevas sanciones económicas contra Rhodesia del Sur en junio y julio de 1966²⁸.

705. Entre los productos que importa el Japón de Rhodesia del Sur y a los que afecta el sistema de licencias, pero que no se han prohibido, figuran el cobre, el asbesto y el mineral de cromo.

706. En diciembre de 1965, la República Federal de Alemania había prohibido el 70% aproximadamente de las mercancías que importaba de Rhodesia del Sur. En 1964, la República Federal importó productos de Rhodesia del Sur por valor de 7.900.000 libras. En una nota dirigida al Secretario General el 4 de marzo de

²⁶ *Ibid.*, Vigésimo Año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1965, documento S/6990.

²⁷ *Ibid.*, Vigésimo Primer Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966, documento S/7114.

²⁸ *Ibid.*, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7362; *ibid.*, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7420.

1966²⁹, la República Federal manifestó que ya no se concedían más licencias de importación de tabaco ni azúcar. El 24 de febrero se informó que la República Federal de Alemania había decidido ampliar la prohibición a fin de que incluyera el ferrocromo y el hierro en bruto. Dicha información manifestaba que no se concederían licencias de importación para satisfacer los contratos de importación firmados recientemente.

707. En la lista de importaciones de Rhodesia del Sur que no ha prohibido la República Federal de Alemania figuran el cobre, el cromo y el asbesto.

708. Se ha comunicado que las cifras de importaciones correspondientes a enero de 1966, últimas disponibles, indican que la República Federal de Alemania compró productos de Rhodesia del Sur (inclusive mercancías procedentes de Rhodesia del Sur compradas a abastecedores radicados en otros lugares) por valor de 1.200.000 libras aproximadamente. Esta cantidad era aproximadamente el doble de la correspondiente a enero de 1965. No se dispone de una división por productos, pero se ha informado que es posible que se haya procedido a constituir reservas bastante elevadas como previsión ante la posibilidad de que se prohíba la importación de más productos.

709. El 22 de abril de 1966 se comunicó que el Reino Unido había patentizado a la República Federal de Alemania y al Japón la conveniencia de que intensificaran sus sanciones contra Rhodesia del Sur.

El embargo del petróleo

El incidente de los petroleros

710. Hacia fines de marzo de 1966 se avistó un petrolero de 13.000 toneladas, el *Joanna V*, propiedad de la Varnma Corporation de Panamá, que con bandera griega se dirigía hacia Beirut con un cargamento de 18.000 toneladas de petróleo crudo destinadas a Rhodesia del Sur. El contrato de fletamento del petrolero pertenecía a la compañía sudafricana A. G. Morrison, de Ciudad del Cabo. Ante las reclamaciones formuladas por el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de Grecia envió, entre el 26 de marzo y el 2 de abril, cuatro mensajes de advertencia al capitán griego y al propietario del petrolero ordenándoles que no descargaran en Beira petróleo destinado a Rhodesia del Sur.

711. La noche del 4 de abril de 1966, la fragata *Plymouth* del Reino Unido interceptó el *Joanna V* a la altura de Mozambique, y un oficial del Reino Unido abordó el barco. Se comunicó que la fragata había recibido instrucciones de no emplear la fuerza. Se dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido había manifestado que el capitán del petrolero había rechazado la solicitud hecha por el oficial del Reino Unido de que alterase sus planes de seguir rumbo a Beira.

712. El *Joanna V* llegó al puerto de Beira el 5 de abril de 1966. El 6 de abril, el Gobierno de Grecia canceló la matrícula griega del petrolero y privó al capitán de su licencia de la Marina Mercante con carácter perpetuo.

713. El 5 de abril de 1966, como parte de la tentativa de impedir que el petrolero descargara, el Se-

cretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Sr. Michael Stewart, celebró una reunión en Londres con el encargado de negocios de Portugal, y el Embajador del Reino Unido en Lisboa visitó al Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Sr. Alberto Franco Nogueira. Se ha comunicado que en ambas entrevistas el Gobierno del Reino Unido puso de relieve la grave responsabilidad en que incurriría el Gobierno de Portugal si el petrolero de matrícula griega descargaba su petróleo en el puerto mozambiqueño de Beira.

714. El 5 de abril de 1966 llegó a Lisboa Lord Walston, Subsecretario Parlamentario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, para celebrar conversaciones con el Sr. Franco Nogueira acerca del embargo del petróleo. Lord Walston celebró tres reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal antes de salir de Lisboa, camino de Londres, el 8 de abril de 1966. Se comunicó que Lord Walston había manifestado que no se sentía enteramente satisfecho con las conversaciones celebradas para conseguir que Portugal diera su apoyo al embargo del petróleo dirigido contra Rhodesia del Sur.

715. El 6 de abril de 1966, el Gobierno de Portugal publicó un comunicado de prensa en relación con la llegada a Beira del *Joanna V*. En dicho comunicado, el Gobierno de Portugal reiteraba su posición de que no había adoptado ninguna iniciativa encaminada a garantizar el abastecimiento de petróleo de Rhodesia del Sur y que no compraba petróleo en nombre de dicho país ni lo transportaba en barcos portugueses. En segundo lugar, el Gobierno de Portugal había dado y seguía dando las mayores garantías de que no permitiría que ningún cargamento de petróleo se desviase a otro país que el señalado primeramente como lugar de destino. Al puerto de Beira llegaban continuamente cargamentos de petróleo destinados a Mozambique, Zambia y Malawi, y el Gobierno de Portugal consideraba que debía reafirmar su posición de principio que consistía en garantizar que no podía detenerse ni desviarse en tránsito ningún cargamento procedente de países sin litoral o destinado a ellos. El Gobierno de Portugal no podía aceptar la responsabilidad de establecer el precedente de injerirse en el libre acceso al mar de los países sin litoral a petición de terceros y para proteger los intereses de éstos. Este era un deber que le imponían los principios inviolables del derecho internacional reconocidos expresamente, además, en acuerdos internacionales.

716. El 8 de abril de 1966, el Gobierno de Portugal publicó un segundo comunicado de prensa en el que reiteró su posición en cuanto a la libertad de las compañías privadas de los territorios portugueses y rechazó toda responsabilidad por la entrada del *Joanna V* en el puerto de Beira.

717. El 11 de abril de 1966, el *Joanna V* levó anclas en la rada mozambiqueña de Beira y atracó junto al muelle. Se comunicó que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal había dicho que el *Joanna V* estaba autorizado a atracar junto al muelle a fin de facilitar el movimiento normal del puerto.

718. El 12 de abril de 1966, el Gobierno de Panamá revocó la matrícula provisional adquirida por el *Joanna V*.

719. El 14 de abril de 1966 se comunicó que un funcionario del Gobierno de Portugal había anunciado que

²⁹ Ibid., Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966, documento S/7181.

el capitán del puerto de Beira había subido al *Joanna V* y se había hecho cargo del navío en nombre de las autoridades portuguesas.

720. El 5 de abril de 1966 se comunicó que otro petrolero, el *Manuela*, perteneciente a los mismos propietarios que el *Joanna V*, se dirigía a Beira con un cargamento de 16.000 toneladas de petróleo crudo para Rhodesia del Sur. El 5 y el 6 de abril de 1966 el Gobierno de Grecia envió dos telegramas de advertencia al capitán del petrolero, que desplazaba 11.000 toneladas, advirtiéndole que no siguiera rumbo a Beira.

721. Se recordará que en la resolución 221 (1966) del Consejo de Seguridad, de 9 de abril de 1966, se pedía al Gobierno del Reino Unido, entre otras cosas, que impidiera, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, la llegada a Beira de naves de las que razonablemente se pudiera pensar que transportaban petróleo destinado a Rhodesia.

722. A raíz de la aprobación de esta resolución, la fragata antisubmarina del Reino Unido *Berwick* interceptó, el 10 de abril de 1966, el petrolero de matrícula griega *Manuela*, a 150 millas al este de Beira, y envió a bordo un grupo armado. Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido manifestó que, como resultado de las medidas adoptadas por la fragata *Berwick*, el *Manuela* había cambiado de rumbo y, en lugar de dirigirse a Beira había puesto proa al sur.

723. El 12 de abril de 1966 el petrolero *Manuela* llegó al puerto sudafricano de Durban y atracó en la rada. El 16 de abril de 1966 el petrolero *Manuela* salió de Durban con rumbo desconocido.

Portugal y el embargo petrolero

724. Según un despacho de prensa, han seguido llegando a Rhodesia del Sur, por el ferrocarril de Mozambique, petróleo y productos petroleros procedentes de Sudáfrica. La cantidad de petróleo que llega diariamente a Rhodesia del Sur a través de Mozambique se ha calculado en 100.000 galones.

725. El Consejo de Administración de la Companhia do Pipeline de Moçambique-Rodésia (CPMR) se reunió en Lisboa el 10 de marzo de 1966 para estudiar la solicitud de la administración local de la empresa CAPREF en Rhodesia del Sur de construir un ramal para conectar con el oleoducto los nuevos tanques que se estaban construyendo en los muelles de Beira, a fin de reanudar el suministro de petróleo crudo a Rhodesia del Sur.

726. En dicha reunión, los directores de Lonrho Ltd. (la empresa del Reino Unido que posee el 62,5% de las acciones de la CPMR) presentaron ciertos documentos jurídicos relativos a las resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración de la CAPREF en Londres. Dichas resoluciones decían que la administración local de la CAPREF no se encontraba en situación de dar instrucciones respecto de actividades emprendidas fuera de Rhodesia del Sur.

727. Según despachos de prensa, el resultado más significativo de la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la CPMR fue el acuerdo de que tendrían que reunirse otra vez antes que pudiera conectarse el oleoducto con los nuevos tanques de almacenamiento que se estaban construyendo junto a los muelles de Beira. La reunión se aplazó *sine die* en el entendimiento de que se volvería a convocar con un aviso previo de 24 horas.

728. El 31 de marzo de 1966 se comunicó que habían terminado las obras de dos de los seis tanques prefabricados, cada uno de ellos con una capacidad de 3.000 toneladas, que se estaban construyendo cerca de la estación de bombeo de Beira; y que harían falta unas 24 horas para conectar los tanques con el oleoducto.

729. El 6 de abril de 1966, el Consejo de la CPMR volvió a reunirse para decidir si los dos tanques de 3.000 toneladas ya terminados en el puerto de Beira deberían conectarse con el oleoducto de forma que pudiera bombearse el petróleo de los petroleros hacia Rhodesia del Sur, así como las 14.000 toneladas de petróleo bruto que estaban detenidas en el oleoducto desde principios de año. La reunión terminó el 7 de abril de 1966, pero no se publicó ninguna declaración oficial. Se citaron palabras pronunciadas por el Director Gerente de Lonrho Ltd., Sr. Alan Ball, en el sentido de que se oponía personalmente a bombear petróleo por el oleoducto hacia Rhodesia del Sur, pero que no podía prever lo que decidirían los portugueses, que tenían mayoría en el Consejo.

730. El 14 de abril de 1966 se comunicó que el régimen de Smith había indicado a los representantes de la CPMR y de la CAPREF que esperaban que pronto estuvieran dispuestos todos los servicios de bombeo y refinación necesarios.

731. El 15 de abril de 1966 se comunicó que se había transportado en vuelos especiales a paracaidistas portugueses desde Lourenço Marques hasta Beira para custodiar el oleoducto Mozambique-Rhodesia. Se dice que tanto el oleoducto como todos los edificios adyacentes están vigilados.

Sudáfrica y el embargo del petróleo

732. La Rhodesia Broadcasting Corporation transmitió en la segunda mitad de marzo-abril de 1966 una serie de noticias que prueban que han seguido llegando a Rhodesia petróleo y productos del petróleo procedentes de Sudáfrica.

733. La cantidad de petróleo y productos del petróleo que, según estas emisiones, han llegado de Sudáfrica, va de unos cuantos centenares de galones a 4.000 galones por cada envío por carretera. Según dichas emisiones, algunos de los conductores que habían llevado a Rhodesia cargamentos de entre 2.000 y 4.000 galones fueron recibidos oficialmente por los alcaldes de Bulawayo y Salisbury en sus respectivos ayuntamientos.

734. El 18 de abril de 1966, el periódico *Rand Daily Mail* calculaba que la cantidad de petróleo de Sudáfrica llegada a Rhodesia del Sur se cifraba entre los 140.000 y los 160.000 galones diarios. Esta cantidad equivaldría, aproximadamente, al doble de lo que consume Rhodesia del Sur desde que se impuso el racionamiento. Según el *Rand Daily Mail*, la cifra se basaba en un minucioso estudio hecho la semana anterior en Beit-Bridge y en Mozambique. Este total estaba formado por unos 45.000 galones que llegaban por carretera cruzando el puente de Beit, y unos 100.000 galones que llegaban por ferrocarril.

735. El mismo periódico manifestó que aunque la cantidad que llegaba por la carretera del Beit-Bridge había pasado de un máximo semanal de 450.000 galones a unos 300.000 galones (véanse los párrs. 261 a

264, *supra*), esta reducción se había visto compensada por el aumento del tráfico ferroviario. El combustible de los camiones cisterna, la mayoría de los cuales procedían del Rand, costaba al régimen de Smith unos 6 chelines por galón. El transporte por ferrocarril, la mayor parte del cual procedía del Rand pasando por Komatipoort y Lourenço Marques, y desde ahí por Malvernía hacia Salisbury y Bulawayo, salía mucho más barato. Se decía que en este tráfico participaban todas las empresas petroleras importantes. Según el *Rand Daily Mail* era significativo a este respecto que los conductores de camiones cisterna manifestaran, según se decía, que en Rhodesia del Sur iba escaseando el espacio de almacenamiento, y que actualmente se veían obligados con gran frecuencia a ir de tanque en tanque buscando donde descargar.

Acontecimientos internos relacionados con el embargo del petróleo

736. El 14 de abril de 1966, el "Ministro de Comercio e Industria", Sr. B. H. Musset, anunció que el 9 de mayo de 1966 terminaría el sistema de racionamiento de combustible existente, al que sucedería un sistema de cupones. Los documentos de identificación para la ración de gasolina, que expiraban el 2 de mayo, tendrían validez durante una semana más, y el público podría comprar su ración de gasolina durante la semana del 3 al 9 de mayo igual que hasta la fecha. El Sr. Musset manifestó que en virtud de este nuevo sistema se introduciría una escala de raciones más equitativa. La nueva escala se basaría en una ampliación de la clasificación de los vehículos por peso, y también se tendría en cuenta la distancia entre el lugar de residencia y el de trabajo.

737. En su discurso transmitido por radio el 16 de abril de 1966, el Sr. Smith anunció que Rhodesia del Sur había decidido no utilizar el petróleo procedente del petrolero *Joanna V*, ya que no pretendía implicar innecesariamente a otros países y a otras personas. Sin embargo, el incidente del *Joanna V* había demostrado que Rhodesia del Sur podía romper el bloqueo y, si lo deseaba, bombear el petróleo a la refinería de Feruka. El hecho de que Rhodesia del Sur no obtuviese petróleo del *Joanna V* no preocupaba demasiado a su régimen. Dijo que, después de todo, como ya sabía la población de Rhodesia del Sur, el empleo del oleoducto para transportar el petróleo de la costa era algo relativamente nuevo. Antes de ello, a Rhodesia del Sur le iba muy bien con el empleo de otros medios, igual que ocurría en otros muchos países del mundo. Rhodesia del Sur seguiría utilizando esos sistemas tradicionales de aprovisionamiento.

738. El Sr. Smith manifestó también en su emisión que su régimen no se conformaba con la situación actual. Estaba haciendo experimentos con una fábrica de gas de carbón vegetal para adaptarlo a motores diesel. El Sr. Smith esperaba que los planos estuvieran dispuestos en breve, y que después se pudiera disponer de ellos en toda Rhodesia del Sur para proceder a la producción comercial y venta al público. Rhodesia del Sur estaba estudiando también la obtención de petróleo a partir de carbón. Se seguía trabajando para conseguirlo y, además, se estaba llevando a cabo una nueva prospección de petróleo que era más alentadora y muy prometedora. Sin embargo, por motivos de seguridad, no podía dar más información.

F. NUEVO EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL³⁰

Introducción

739. El Comité Especial estudió nuevamente la cuestión de Rhodesia del Sur en su 411a. sesión, celebrada el 10 de mayo de 1966, y posteriormente en sus sesiones 418a., 423a. a 427a., 432a. y 447a., celebradas en Africa entre el 24 de mayo y el 15 de junio de 1966.

Peticiones escritas y audiencia de peticionarios

740. El Comité Especial distribuyó también las peticiones escritas que se enumeran a continuación, relativas al Territorio³¹:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>
Sr. G. Pongault, Secretario General de la Union Panafricaine et Malgache des des Travailleurs croyants	A/AC.109/PET.456
Sr. David Mpongo, representante en la República Arabe Unida de la Zimbabwe African People's Union (ZAPU)	A/AC.109/PET.458/Add.2
Sr. Faisal El-Haji, Presidente de la National Union of Kuwaiti Students	A/AC.109/PET.466
Sr. E. Backwell	A/AC.109/PET.475
Sr. Irving Brown, representante de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ante las Naciones Unidas	A/AC.109/PET.476
Sres. Laurel Thompson, Christopher Adams y Ronald Brady	A/AC.109/PET.477
Sr. Joseph A. Fallon, Presidente del United States Youth Council	A/AC.109/PET.517
Dr. Robert John, Presidente del Friends of Rhodesia Committee, Nueva York	A/AC.109/PET.546
Sr. Carl-Axel Valén, Secretario General de la Asamblea Mundial de la Juventud	A/AC.109/PET.548

741. El Comité Especial escuchó a los siguientes peticionarios en relación con Rhodesia del Sur:

Sr. T. G. Silundika, representante de la Zimbabwe African People's Union (ZAPU) (A/AC.109/PET.458)	(sesiones 423a. y 424a.)
Sres. E. M. Pasipanodya, representante principal en Tanzania, y L. P. Chihota, representante auxiliar en Zambia, de la Zimbabwe African National Union (ZANU) (A/AC.109/PET.463)	(424a. sesión)
Sr. David Mpongo, oficina de El Cairo de la Zimbabwe African People's Union (ZAPU) (A/AC.109/PET.458/Add.1) ³²	(447a. sesión)

³⁰ Véase también el capítulo II, en que figura un resumen de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, sobre la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo que respecta a Rhodesia del Sur y a otros territorios coloniales considerados por el Comité Especial durante sus reuniones en Africa.

³¹ Las siguientes peticiones se distribuyeron después de la adopción por el Comité Especial de una resolución sobre Rhodesia del Sur (A/AC.109/167) en su 427a. sesión, el 31 de mayo de 1966: A/AC.109/PET.458/Add.2, A/AC.109/PET.476/Add.1, A/AC.109/PET.517, A/AC.109/PET.546 y A/AC.109/PET.548.

³² Se escuchó a este peticionario después que el Comité Especial había adoptado una resolución relativa a Rhodesia del Sur (A/AC.109/167) en su 427a. sesión, celebrada el 31 de mayo de 1966.

742. El Sr. Silundika (ZAPU) dijo que desde que el Comité había celebrado sus sesiones en Zambia en 1965, la situación política en Rhodesia del Sur había empeorado. El régimen de los colonos había intensificado su represión de la población africana. Se había señalado en aquel momento que la finalidad del Gobierno del Reino Unido era permitir que el régimen minoritario de los colonos obtuviera la independencia. La bien conocida declaración unilateral de independencia de Ian Smith era sólo una etapa de ese plan del Gobierno británico para crear eventualmente un régimen minoritario soberano de los colonos en Rhodesia del Sur. Esa opinión era reforzada por el hecho de que el Reino Unido mantenía una presencia legal en Rhodesia del Sur en la persona de un gobernador, por intermedio del cual se habían reanudado en realidad las conversaciones entre Londres y Salisbury. No cabía duda de que la pretendida declaración unilateral de independencia era un sondeo del Reino Unido para ver cuál era la reacción internacional ante la idea de instituir un régimen minoritario de colonos independientes en África.

743. La declaración unilateral perseguía dos propósitos inmediatos: permitir a los colonos consolidar su economía y reforzar sus fuerzas armadas y de policía, y habituarlos a hacerse tan indiferentes a la condenación internacional que pudiesen hacerle tan poco caso como los boers de Sudáfrica. Todos los que se interesaban en la situación en Rhodesia del Sur deberían ver tan claramente como el ZAPU que el Reino Unido había adoptado deliberadamente una actitud que impedía a los demás hacer algo para eliminar el opresivo régimen colonialista, al propio tiempo que él no hacía nada por su parte para restablecer el orden y la justicia.

744. El régimen continuaba sus actividades de represión contra los africanos, más de 34.000 de los cuales estaban en prisión o condenados a muerte o sometidos a otras restricciones. Diariamente efectuaba detenciones en masa y organizaba "cacerías de brujas" al estilo nazi. Continuaba estableciendo campamentos para detenidos en número cada vez mayor en las regiones rurales, cerca de los territorios de algunos jefes que habían perdido por completo la confianza de sus pueblos. Esas eran las circunstancias en que continuaban detenidos el jefe de las masas africanas de Zimbabwe, Joshua Nkomo, y otros dirigentes. El conflicto entre los africanos y los blancos era cada vez mayor. Aunque los colonos estaban bien armados y tenían bajo su mando una fuerza de casi 40.000 hombres, los africanos estaban decididos a no aceptar nada menos que la restitución integral de su país y la completa eliminación de los instrumentos de represión de los colonos. Por consiguiente, la situación en Rhodesia del Sur iba entrando en una fase peligrosa de resistencia armada, que repercutiría forzosamente más allá de la frontera del país y que podía representar nada menos que una amenaza a la paz internacional. El peticionario temía que hubiese una resistencia general a menos que se adoptaran rápidamente medidas para poner fin al régimen de Smith lo antes posible.

745. El Reino Unido pretendía tomar medidas para poner fin al régimen ilegal de Ian Smith como si sólo se tratara de una cuestión de legalidad o ilegalidad. Era bien sabido que el Reino Unido alentaba deliberadamente al régimen minoritario a echar el ancla en Rhodesia del Sur prometiéndole no usar la fuerza si se apoderaba de la independencia. Desde la declaración unilateral de independencia el Reino Unido había habla-

do de las sanciones económicas como si fueran la única medida para restablecer el orden. Pero esas sanciones no sólo habían resultado ineficaces sino que desde la reanudación de las conversaciones entre Salisbury y Londres se había visto que no eran más que un farol. Sudáfrica proporcionaba más de 100.000 galones de petróleo por día a Rhodesia del Sur, cuyo consumo diario era de 83.000 galones, Japón, la República Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido continuaban un comercio floreciente con Rhodesia del Sur, lo mismo que sociedades norteamericanas como la Union Carbide Corporation de Salukwe, y el Reino Unido, los Estados Unidos y la República Federal de Alemania mantenían aún sus misiones diplomáticas en Salisbury.

746. Las exportaciones alemanas a Rhodesia del Sur en enero y febrero de 1966 habían ascendido a 330.000 y 225.000 libras esterlinas respectivamente, mientras que sus importaciones de Rhodesia del Sur correspondientes a diciembre de 1965 y enero de 1966 habían sido de 1.116.000 y 1.170.000 libras esterlinas, respectivamente.

747. Un corredor de finanzas de Hamburgo, director de un grupo comercial de Alemania y Rhodesia del Sur, Herr Joachim Seelmaecker, había dicho en Johannesburgo a un corresponsal del *Daily Express*, a fines de abril, que la situación de Rhodesia era favorable para los negocios y que no veía por qué razón los japoneses y los franceses serían los únicos que aprovecharan esas oportunidades que la actitud de los británicos abría a los demás.

748. Esto demostraba la facilidad con que podían burlarse las sanciones económicas a que el Reino Unido quisiera limitar la oposición mundial al régimen de Smith, y que dichas sanciones económicas eran completamente inadecuadas para hacer frente a la situación. El Sr. Strauss, ex Ministro alemán de Defensa, había tratado por su parte de atraer nuevos capitales a Rhodesia del Sur.

749. Aunque los gobiernos se hubiesen pronunciado en contra del comercio con Rhodesia del Sur, no habían podido impedir el intercambio que realizaban las sociedades registradas en esos países. Más aún, se había sabido que una sociedad japonesa había vendido últimamente gases lacrimógenos al régimen de Smith, que los utilizaba contra los africanos, y que Turquía no sólo le había vendido armas sino que además un experto en guerrillas turco estaba capacitando a fuerzas de los colonos en tácticas de lucha contra las guerrillas. Se podía decir que las sociedades y los nacionales que ayudaban al Reino Unido a consolidar el régimen de los colonos actuaban independientemente de la política de sus gobiernos, pero el resultado era que sus países estaban ayudando a un régimen indeseable. El peticionario creía que el Comité Especial podía investigar esa información y que, si se comprobaba que era verdadera, se debía preguntar a los países interesados por qué estaban procediendo en África en contra de los intereses africanos.

750. La actitud de Sudáfrica y de Portugal, que sostenían abiertamente la dictadura de los colonos, indicaba no sólo su alianza económica sino también su alianza militar para oprimir a las poblaciones africanas que vivían en sus territorios, y usaban el Zambezi como una línea de defensa contra un África libre e independiente.

751. El Reino Unido había reanudado las conversaciones con sus agentes en Rhodesia del Sur y sin la menor vergüenza decía al mundo entero que esas con-

versaciones tenían por fin resolver el problema de Rhodesia del Sur, como si ese problema pudiera ser resuelto entre el Gobierno del Reino Unido y los agentes de Rhodesia del Sur. No era posible esperar que esas conversaciones, que se realizaban en condiciones discriminatorias y con fines discriminatorios, produjesen resultados que no tuviesen carácter discriminatorio. Su organización se negaba a concederles ninguna validez y estimaba que constituían una flagrante conspiración para preparar una fórmula que permitiese apartar a los africanos. Sólo se hallaría una solución pacífica del problema de Rhodesia del Sur reuniendo una verdadera conferencia constitucional a la que asistieran representantes del pueblo y que preparase una constitución para traspasar directamente el poder a la mayoría africana.

752. Era bien sabido que el Reino Unido estaba contemplando la idea de constituir una comisión real encargada de determinar los deseos de la población del país, con garantías de no impedir el Gobierno de la mayoría; esa investigación serviría de base para conferir la soberanía al régimen de los colonos. Los pretendidos seis principios del Reino Unido para resolver el problema de Rhodesia habían sido presentados en una forma bastante vaga como para permitir que los pueblos africanos fuesen totalmente traicionados. El Primer Ministro Wilson había traicionado a Rhodesia del Sur aún antes de la declaración unilateral prometiendo que jamás usaría la fuerza, como probaba la serie parlamentaria *Hansard*; y el 27 de abril había dicho una vez más que transcurriría un largo período antes que se justificara el régimen de la mayoría en Rhodesia del Sur. Había demostrado claramente que quería traspasar al régimen de los colonos la misión de garantizar el progreso sin trabas hacia el Gobierno de la mayoría por ese "largo período", lo que equivalía a destruir prácticamente toda posibilidad de acceso al poder de la mayoría. El Comité Especial debía hacer constar en las actas que la ZAPU, en nombre de las masas que luchan en Zimbabwe, no aceptaría jamás una reforma constitucional ni un régimen que no se basase en el ejercicio del poder por la mayoría africana.

753. Era evidente que el Reino Unido no sólo era incapaz de derrocar la dictadura establecida por sus colonos en Rhodesia del Sur, sino que además era totalmente opuesto a esa idea. No se le podía permitir que siguiera pretendiendo aprobar a los que se estaban esforzando por hallar una solución justa. Por consiguiente, el Sr. Silundika proponía al Comité Especial las condiciones siguientes para resolver el problema de Rhodesia del Sur:

a) El Reino Unido, como país colonialista, debería ser expulsado del Comité Especial por ser un obstáculo a los sinceros esfuerzos de descolonización de las Naciones Unidas;

b) Se debería declarar que el Reino Unido es el verdadero enemigo del pueblo africano de Zimbabwe y del deseo general de paz en Africa;

c) Todos los Miembros de las Naciones Unidas deberían comprometerse a no reconocer ni asistir en modo alguno a todo régimen establecido en Zimbabwe por el Reino Unido que no se basase en el ejercicio del poder por la mayoría africana;

d) Se debería condenar al Reino Unido por su complicidad en los brutales asesinatos de africanos — que sólo aspiraban a la justicia, la libertad y el restablecimiento de los derechos de su país — cometidos por el régimen de los colonos;

e) Cuando considerasen las medidas que le correspondía adoptar contra el régimen de Rhodesia del Sur, conforme a sus responsabilidades, las Naciones Unidas debían decidir francamente que sólo el recurso a la fuerza permitiría resolver el problema de Rhodesia del Sur;

f) Los Miembros de las Naciones Unidas, individual o colectivamente, deberían asistir en todas las formas posibles al pueblo africano de Zimbabwe en sus esfuerzos para derrocar la dictadura de la minoría en Rhodesia del Sur; y

g) Debería impedirse que continuasen las actividades de algunos Miembros de las Naciones Unidas que mantenían relaciones comerciales y de otra índole con el régimen minoritario de los colonos.

754. Una solución pacífica sólo sería posible cuando todos los dirigentes y los demás presos y detenidos políticos hubiesen sido puestos en libertad incondicionalmente y cuando los jefes africanos gozasen de una libertad política absoluta para consultar a sus partidarios con respecto a la convocación de una genuina conferencia constitucional cuya finalidad concreta fuese traspasar directamente el poder a la mayoría africana.

755. Respondiendo a las preguntas que se le dirigieron, el Sr. Silundika (ZAPU) declaró que el embargo de petróleo no había tenido ningún efecto de importancia. Se había hablado mucho acerca de la importación de petróleo a través de Beira, pero otras rutas habían quedado abiertas, y entraban cada día más de 100.000 galones de combustible desde Sudáfrica a Rhodesia del Sur, sin contar los suministros que se recibían a través de Mozambique. El aumento del precio del petróleo no se debía al embargo del petróleo, pues era sólo una medida provisional tomada por el régimen rebelde. Además, los dos petroleros *Manuela* y *Joanna V* a pesar de que se había dicho con gran publicidad que se les había asignado otra ruta, viajaban todavía por las costas de Africa meridional y era muy posible que descargasen su carga en un puerto sudafricano o en otra parte.

756. Se estaba ampliando, a un costo de 200.000 libras esterlinas, la refinería de petróleo de Salisbury para que pudiese recibir el petróleo crudo que llegaba a través de Sudáfrica y Mozambique. Se habían iniciado también medidas de colaboración entre Rhodesia del Sur y Sudáfrica encaminadas a garantizar la seguridad y continuidad de los oleoductos de aprovisionamiento. Se había implantado el racionamiento de petróleo pero sólo con el propósito de conservar las existencias. Como lo había manifestado claramente el mismo Smith, Rhodesia del Sur contaba con abastecimiento de petróleo para dos años. Además, Sudáfrica estaba tratando de aprovechar ciertos depósitos de petróleo que se encontraban dentro de su territorio y, con la asistencia de la poderosa Anglo-American Company, se estaba procurando extraer del carbón otras formas de combustible.

757. El Sr. Chihota (ZANU) declaró que hablaba en nombre del movimiento de liberación que representaba el pueblo de Zimbabwe: Rhodesia del Sur, como lo llamaban los imperialistas. Dicho movimiento dirigía la lucha armada cuyo propósito era desalojar el colonialismo británico de Zimbabwe.

758. En nombre de los 4 millones de africanos explotados de Zimbabwe, agradecía la oportunidad de desenmascarar las verdades a medias y las mentiras proferidas por los colonialistas británicos en las Nacio-

nes Unidas, en sus esfuerzos por perpetuar el yugo que habían impuesto sobre el pueblo de Zimbabwe. Expresó su agradecimiento al Presidente, Gobierno y pueblo de Tanzania tanto por proporcionar las facilidades que habían permitido a los representantes de la ZANU comparecer ante el Comité, como por asumir una función principal en la lucha de liberación del pueblo de Zimbabwe.

759. Advertía con suma satisfacción la ausencia del Comité Especial de los representantes de la Potencia archicolonialista e imperialista, el Reino Unido, ausencia que había que esperar que fuese permanente. Como se había declarado en el discurso de la ZANU ante el Comité Especial en su reunión de Lusaka en 1965, en la situación de Rhodesia el culpable era el Reino Unido y el agente era Smith. Como Potencia colonialista debía ser expulsada del Comité y, lo mismo que a Portugal y Sudáfrica, no se le debía permitir participar en el trabajo del Comité hasta que hubiese renunciado al colonialismo.

760. Desde que los representantes de la ZANU comparecieron ante el Comité en Lusaka, Zambia, en 1965, la posición había empeorado: el Presidente de la ZANU, Sr. Ndabaningi Sithole, y las tres cuartas partes de los principales miembros estaban o detenidos o sometidos a restricciones. Los tres campamentos de concentración más conocidos eran Sikombela, Wha Wha y Gonakudzingwa donde, junto con más de 20.000 partidarios de la ZANU y luchadores por la libertad, se encontraban sus dirigentes confinados, sin proceso alguno y en deplorables condiciones. El régimen de Smith había convertido minas fuera de uso en prisiones especiales para acomodar a algunos de los dirigentes de la ZANU, todos ellos detenidos por un período mínimo de cinco años. Sus familias y amigos ignoraban su paradero. Los campamentos de prisioneros se habían planeado deliberadamente a fin de reducir a sus ocupantes africanos a un nivel animal. A aquellos que se oponían al Gobierno colonial británico de Zimbabwe se los arrancaba de sus hogares por la noche para trasladarlos a prisiones donde muchos de ellos morían. Hacía sólo dos semanas muchos africanos prominentes entre los que figuraban dos médicos, el Dr. Silas Mundawara y el Dr. Mutasa, habían sido encarcelados, junto con 500 africanos, a raíz del sangriento tiroteo ocurrido en Sinoia entre las fuerzas de la ZANU y el régimen títere. Se detenía diariamente a otros muchos miles en diversas partes del país. Sería tomar demasiado tiempo del Comité Especial volver a referir en todos sus detalles las atrocidades sufridas por el pueblo de Zimbabwe, y se limitaría por lo tanto a dos ejemplos. En primer lugar, la *Land Apportionment Act*, que dividía la tierra entre los colonos británicos y la población autóctona de Zimbabwe, se estaba aplicando con mayor rigor a fin de privar a los africanos de su ganado, zonas de cultivos y hogares. La discriminación por causa del color se aplicaba con tanto rigor como en Sudáfrica. En segundo lugar, en las zonas urbanas se expulsaba a miles de africanos de sus trabajos y casas y se les reducía así al nivel de mendigos. Todo esto se practicaba a fin de que los colonos tuviesen aún más y mejores empleos y un nivel de vida aún más alto, cuando ya disfrutaban de lo mejor del mundo. Los desalojamientos eran en gran parte el resultado de una política colonial británica deliberada más bien que consecuencia de sanciones.

761. El 11 de noviembre de 1965, el Gobierno colonialista había declarado unilateralmente la indepen-

dencia. El Reino Unido, que había creado las condiciones políticas y económicas que habían hecho posible tal declaración, había tratado así de absolverse de toda responsabilidad por las nuevas violaciones de los derechos humanos del pueblo de Zimbabwe por parte del Gobierno colonialista británico, y había podido pretender que luchaba contra ese Gobierno mediante sanciones ineficaces. A consecuencia de todo esto, los colonos habían aumentado las fuerzas de opresión a un nivel sin precedentes. La ZANU, que estaba luchando por recuperar la tierra del pueblo de Zimbabwe, luchaba también por sus derechos humanos, por la democracia y la justicia. La declaración unilateral de independencia no era más que otro medio empleado por los británicos, tanto en Rhodesia del Sur como en Gran Bretaña, para continuar la explotación colonial.

762. Desde el principio la ZANU se había opuesto a las sanciones británicas que, como lo habían advertido muchas veces, habían fracasado trágicamente. Sólo habían puesto obstáculos, pero no derrotarían nunca a los colonos británicos. Debido a que el Reino Unido — Potencia colonial con intereses enormes en África meridional — se nombraba a sí mismo único responsable de su aplicación, había sido un error del Consejo de Seguridad, que bailaba al son del imperialismo británico, permitir que el Reino Unido se convirtiese en policía de sus propias y perversas maniobras.

763. La ZANU y el pueblo de Zimbabwe habían decidido iniciar una lucha armada que, estaban convencidos, era la única forma práctica y eficaz de recuperar sus derechos. Cualquier otro procedimiento resultaría en una continuada explotación colonial. La ZANU se había visto obligada a hacer frente a la violencia contrarrevolucionaria con la resistencia revolucionaria y, como sus representantes habían informado al Comité Especial en 1965, habría una sangrienta guerra racial en Zimbabwe. Por vez primera desde las guerras iniciales de liberación en 1890-1896, conocidas en Zimbabwe con los nombres de Chimurenga y Chindunduma, dirigidas por las fuerzas revolucionarias de la ZANU, las masas habían luchado con las fuerzas colonialistas de seguridad cerca de Sinoia el 28 y el 29 de abril de 1966. Bajo las órdenes de las fuerzas de la ZANU, habían luchado nuevamente el 16 y el 17 de mayo de 1966 con los colonialistas cerca de Hartley. En Sinoia, por lo menos siete valerosos héroes habían perdido la vida, y muchos civiles de Zimbabwe habían sido asesinados por los colonos británicos. Tales batallas habían abierto una brecha en lo que hasta entonces parecía ser la seguridad inexpugnable de los colonos.

764. El problema de Rhodesia seguía constituyendo una amenaza a la paz mundial. Las batallas en el país, la inclusión en las sanciones británicas de países como Zambia, la amenaza de invasión militar de Zambia y de los territorios vecinos por parte de los colonialistas, la asistencia prestada por Sudáfrica y Portugal a los colonialistas de Rhodesia del Sur, eran todos factores que contribuían a la gravedad de la situación y a la amenaza a la paz en África y el mundo. Las Naciones Unidas podían ayudar a los habitantes de Zimbabwe a adquirir la libertad y podían disminuir el derramamiento de sangre que sería consecuencia inevitable cuando la ZANU desarrollase e intensificase la lucha armada. Podían ayudar a derrotar más rápidamente el colonialismo británico tomando las medidas siguientes: en primer lugar, las sanciones extensivas a Sudáfrica, Mozambique y Angola, debían ser de carácter obligatorio

y colocarse bajo la supervisión de las Naciones Unidas. En segundo lugar, todas las fronteras de Zimbabwe debían ser cerradas con una fuerza de las Naciones Unidas. En tercer lugar, en Rhodesia del Sur debería emplearse una fuerza compuesta de nacionales de países seleccionados por el pueblo de Zimbabwe y debería operar bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la OUA.

765. Finalmente, el orador condenó en términos enérgicos las negociaciones de independencia que se venían celebrando entre los británicos en Rhodesia del Sur y los británicos del Reino Unido. Tales conversaciones eran un fraude y tenían por fin crear otra Sudáfrica que trabajase en estrecha colaboración con el Dr. Salazar y el Dr. Verwoerd. Las Naciones Unidas debían expresar claramente en una resolución que nunca reconocerían las decisiones logradas mediante consultas entre el Reino Unido y Rhodesia del Sur en las cuales no hubiesen participado representantes africanos de Zimbabwe, actualmente detenidos o cuyas actividades estaban restringidas.

766. Al igual que la ZANU, las Naciones Unidas debían manifestar claramente que no se podían aceptar medidas a medias en lo relativo a la regla de la mayoría, que debía aplicarse inmediatamente. La ZANU rechazaba de plano el programa de cinco puntos del Reino Unido por el cual serían los colonialistas los que determinasen el ritmo de progreso africano. Si no se reconocía inmediatamente el principio de la mayoría en Zimbabwe, la guerra racial continuaría y la ZANU no depondría las armas hasta que se hubiese logrado ese fin.

767. El Sr. Pasipanodya (ZANU) declaró que era de esperar que la tan a menudo repetida condenación del colonialismo británico hecha por el Comité Especial fuese puesta en práctica. A juicio de su organización, habría que expulsar al Reino Unido de todos los órganos de las Naciones Unidas si se deseaba eliminar el colonialismo de la faz de África.

768. El Sr. Mpongo (ZAPU), hablando en nombre del pueblo oprimido de Zimbabwe y de todos sus dirigentes detenidos o encarcelados por el régimen rebelde de Rhodesia, expresó su agradecimiento al Comité Especial que le había brindado — por segunda vez durante su presente jira por África — la oportunidad de exponer su caso, que preocupaba a todas las naciones amantes de la libertad.

769. En Zimbabwe se negaban a los africanos todos los derechos de unos ciudadanos libres de su país natal, y los colonos gobernaban a mano armada. La ZAPU estimaba que el Comité debía vigilar la situación reinante en Rhodesia, que representaba una grave amenaza no sólo para la seguridad del África meridional y para los países vecinos al norte de Rhodesia del Sur — los Estados africanos independientes — sino para la seguridad de todo el continente africano e incluso para la paz y la estabilidad internacionales.

770. Rhodesia del Sur tenía una historia colonial deplorable, caracterizada por la ilegalidad, las medidas unilaterales y el racismo. Era una historia de ilegalidad porque el propio colonialismo era execrable e ilegal. No existía ningún contrato que demostrase que el pueblo africano de Zimbabwe había entregado sus derechos y su país a cambio del gobierno de los británicos y de la dominación de los colonos. La inexistencia de un documento de esa índole era prueba

clara de que la ocupación y colonización británicas eran a la vez ilegales y unilaterales. Esa era la razón por la que la ZAPU luchaba contra el gobierno colonial y sus vástagos, el “colonialismo” y el fascismo.

771. Las leyes opresivas de Rhodesia del Sur habían creado una situación en la que la libertad individual era pisoteada por los colonos. Había llegado a ser ilegal el que un africano de Rhodesia del Sur quisiera ejercer sus derechos inalienables.

772. Las leyes vigentes en Rhodesia del Sur disponían, entre otras cosas, lo siguiente: toda declaración que atribuyese un motivo impropio a la legislatura, el Gobierno, los ministros, los funcionarios o cualquier departamento del Gobierno era, *prima facie*, subversiva; también lo era toda declaración (aunque no fuese intencional) que pudiese incitar al descontento contra el Gobierno o inducir a cualesquiera persona o personas a resistir tales leyes ya fuera activa o pasivamente. Toda organización o publicación podía ser prohibida arbitrariamente por el Gobierno y toda persona podía ser confinada en cualquier zona que el Gobierno juzgase conveniente, por períodos hasta de cinco años. La policía podía penetrar sin mandamiento judicial en cualquier casa en la que sospechase que pudiera haberse hecho alguna declaración subversiva. Los tribunales estaban obligados a imponer penas mínimas por una amplia gama de delitos: de 5 a 20 años por arrojar o amenazar con arrojar un objeto a un automóvil; de 2 a 7 años por hacer el boicot; y pena de muerte por incendio intencional.

773. Según la mayoría de las leyes, el acusado tenía que probar su inocencia. No satisfecho con tales disposiciones, el régimen ilegal de Ian Smith había impuesto, reiteradamente, leyes de excepción mediante las cuales se eliminaban los juicios.

774. Si se examinaba la historia de Zimbabwe, podía comprobarse que el Reino Unido había cometido graves delitos contra el pueblo africano. El Reino Unido había permitido sistemáticamente el robo de tierras y la discriminación contra los ciudadanos africanos, mientras compartía con sus parientes y amigos — la minoría de colonos blancos — las ganancias de la explotación. El Reino Unido no había usado jamás sus llamados poderes reservados para poner coto a la legislación discriminatoria durante los períodos comprendidos entre 1923 y 1953 y entre 1953 y 1961.

775. Además el Reino Unido había rechazado en 1962 la petición que le hicieron ochenta y un países en las Naciones Unidas, para establecer en Rhodesia del Sur elecciones mediante sufragio universal y, en 1965, juntamente con los Estados Unidos, había rechazado la petición que le hicieron las Naciones Unidas de que usara la fuerza contra la declaración unilateral de independencia hecha por el régimen de Smith. No obstante, convenía señalar que el Reino Unido no había vacilado en hacer uso de la fuerza en la Guayana Británica y en Adén.

776. Las sanciones económicas aplicadas a medias por ese país habían resultado ineficaces y fútiles. El pueblo oprimido de Zimbabwe y todas las naciones del mundo amantes de la libertad eran testigos del nacimiento de una nueva Sudáfrica. Dicho sea de paso, a esta nación la había puesto en marcha el Reino Unido en 1910.

777. Las tierras y las riquezas de Zimbabwe estaban divididas desigualmente. La población de colonos

de Rhodesia del Sur poseía más de 36 millones de acres de las mejores tierras, o sea el 38% de la superficie total, de los cuales, según se calculaba, sólo utilizaban el 3%.

778. Los 4 millones de africanos de Rhodesia del Sur tenían solamente 40 millones de acres, y el agricultor africano medio no poseía más de seis acres de tierras, generalmente pobres. Los agricultores blancos obtenían, por lo común, mejores precios por sus productos, mientras que los africanos sólo lograban aproximadamente el 20% de esos precios. Los ingresos anuales medios del ciudadano blanco de Rhodesia del Sur no bajaban de 1.400 libras esterlinas, mientras que los del africano sólo ascendían a 114 libras esterlinas.

779. La escandalosa ley de distribución de tierras (*Land Apportionment Act*) prohibía a los africanos poseer tierras y efectuar transacciones en los centros comerciales de las ciudades. Los africanos sólo podían vivir en esas zonas en calidad de sirvientes. A los trabajadores africanos les estaba vedado desempeñar trabajos calificados.

780. Las oportunidades de instrucción que se ofrecían a los africanos estaban estrictamente limitadas, al igual que en el sistema de educación sudafricano para bantúes. En el actual sistema educativo había educación para "europeos", para "asiáticos", para "personas de color" y para "africanos". Los diferentes sistemas de educación no sólo eran administrados separadamente, sino que, además, el Gobierno los sufragaba con partidas diferentes del presupuesto. Además, se practicaba un tipo de apartheid según el cual se separaba a las distintas razas, dándose preferencia a los europeos en detrimento de la mayoría de los habitantes del país. Estas injusticias, y muchas otras, probaban sin lugar a dudas la gravedad del porvenir político de Rhodesia del Sur.

781. El Reino Unido, apoyado por aquellas naciones que odian el concepto de un gobierno mayoritario en Zimbabwe, se proponía proseguir su política racista de apoyar a toda costa al Gobierno ilegal minoritario. El pueblo africano de Zimbabwe continuaba opinando que el Reino Unido hubiera podido evitar ese trágico acontecimiento si hubiese defendido los intereses de la mayoría, es decir, de los 4 millones de africanos. Por tener una idea clara de la conducta imperialista británica — caracterizada al sur del Zambeze por la constante ayuda económica y militar que prestaba a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur — el pueblo africano de Zimbabwe no se hacía ilusiones de ninguna especie en cuanto a la tácita complicidad del Reino Unido en el delito cometido por el régimen minoritario racista contra el pueblo autóctono de Zimbabwe.

782. Los últimos 76 años habían sido testigos de la explotación despiadada del pueblo africano por los colonos, de asesinatos, de torturas y de la negación absoluta de sus derechos. El Reino Unido era responsable de todas esas injusticias y atrocidades. De hecho, los colonos no eran más que simples guardianes de los intereses económicos británicos. También era evidente que todas las pérfidas constituciones que el Reino Unido había venido imponiendo a Zimbabwe desde 1923 habían sido antidemocráticas y basadas en el principio del racismo y del gobierno minoritario por tiempo indefinido.

783. Algunos ejemplos bastarían para demostrar que la conducta del Reino Unido en Rhodesia del Sur

se había caracterizado por las medidas unilaterales y el racismo. La ocupación británica se había efectuado en 1890 sin consultar a los africanos y sin su consentimiento; la concesión de la autonomía a los colonos británicos se había llevado a cabo en 1923 sin la participación de los africanos ni su consentimiento; la introducción del apartheid, encubierto en la *Land Apportionment Act*, se había realizado a principios del decenio de 1940 por los colonos británicos con el apoyo y consentimiento del Reino Unido pero no de los africanos; la extinta Federación de Rhodesia y Niasalandia fue impuesta en 1953 sin el consentimiento de los africanos; la Constitución racista y antidemocrática de 1961 había sido impuesta contra la oposición unánime de los africanos; en las vergonzosas negociaciones que los blancos realizaron entre sí desde 1961 hasta noviembre de 1965 no había habido ni participación ni consentimiento de los africanos. La declaración unilateral de independencia había sido impuesta por los colonos desafiando las peticiones y la oposición de los africanos y las actuales conversaciones anglo-rhodesias también se realizaban sin la participación ni el consentimiento de los africanos. En efecto, los dirigentes africanos que deberían representar a los africanos oprimidos se encontraban en las cárceles de Smith. No había motivo alguno por el cual los legítimos representantes del pueblo africano no debiesen participar en esas conversaciones, que afectaban al porvenir de su país y a su patrimonio, si es que realmente tenían por objeto hallar una solución genuina y duradera para la crisis de Rhodesia.

784. La iniciativa tomada por el Reino Unido en las Naciones Unidas, de mantener la cuestión de Rhodesia fuera del control internacional, había tenido por resultado frustrar toda tentativa de que la Organización atacase el problema enérgicamente. Al rechazarse recientemente una resolución del Consejo de Seguridad sobre la aplicación de sanciones obligatorias y el uso de la fuerza en caso necesario, se había eliminado todo instrumento internacional para instar al uso de la fuerza en Rhodesia.

785. Por consiguiente, en lo que se refería al Reino Unido, había quedado totalmente eliminado el peligro de una reacción internacional por conducto de las Naciones Unidas contra el régimen minoritario independiente de Rhodesia. Ahora podía, pues, proclamar abiertamente su reconocimiento legal del régimen y poner a sus aliados en condiciones de hacer lo mismo.

786. Basando sus cálculos en esa idea, el Reino Unido había reanudado sus conversaciones con el régimen de Rhodesia para completar definitivamente la añagaza de dar visos jurídicos a la independencia del régimen de Smith. Se estaba organizando sigilosamente una campaña para asegurar que los territorios que rodeaban a Rhodesia admitiesen y reconociesen la solución que el Reino Unido acordase con sus congéneres en las actuales conversaciones. Al admitir y reconocer tal solución, los países vecinos aislarían y protegerían automáticamente el territorio de Rhodesia, eliminando toda posible base de infiltración contra el régimen. Aunque el verdadero problema de Rhodesia del Sur era el de dar a su población un gobierno mayoritario, en lo que respectaba al Reino Unido este problema había dejado de existir. En estos momentos su preocupación era lograr que las disposiciones que había tomado para Rhodesia del Sur fuesen apoyadas por la mayoría de los Estados que la circundaban, con

lo que se asegurarían al mismo tiempo el reconocimiento internacional y la independencia del régimen.

787. Tales disposiciones debían resultar tolerables para Sudáfrica y Mozambique, lo que prácticamente significaba seguridad territorial en la mayoría de las fronteras para el régimen de Rhodesia del Sur. Si mediante esa estratagema el Reino Unido lograba romper el hielo para el reconocimiento del régimen de Rhodesia del Sur, a continuación trataría de dominar a los Estados africanos vecinos (los cuales desearían que en Rhodesia del Sur se pasara rápidamente al gobierno de la mayoría) mediante presiones económicas, y de esa manera neutralizar toda posibilidad de que esos países se convirtiesen en fuentes de apoyo a las actividades contra el régimen de Rhodesia del Sur.

788. El disfraz constitucional podría consistir en incluir unos pocos africanos en la administración, aumentar a un tercio la proporción de escaños parlamentarios para los africanos y ampliar el derecho al sufragio dando privilegios a un puñado de africanos de una cierta clase. Con esto, Ian Smith tendría asegurado el poder.

789. Cuando el Sr. Wilson fue por primera vez jefe de la oposición en la Cámara de los Comunes, había censurado a los tories por no haber resuelto el problema de Rhodesia del Sur. En marzo de 1963, declaró ante dicha Cámara:

"Hemos dicho que es indefendible toda Constitución que no dé al pueblo de esos territorios el derecho de decidir su propio destino. Por ese motivo hemos atacado enconadamente la Constitución de Rhodesia del Sur, y un gobierno laborista procedería a enmendarla. Es una actitud que hemos hecho constar con absoluta claridad."

790. Después de que, durante una de las sesiones que celebró en 1963, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó al Reino Unido a que suspendiese la Constitución de 1961, el Sr. Harold Wilson había interpelado en la Cámara de los Comunes al dirigente conservador, Sir Alec Douglas Home, en los siguientes términos:

"Y ahora debo pedir al Primer Ministro que se pronuncie de modo absolutamente inequívoco sobre la petición que ha recibido. Aunque nuestro buen nombre ha quedado mancillado por la manera de actuar en la cuestión del África Central, lo que hay en juego para nuestro país en África, en las Naciones Unidas y en el mundo es demasiado para evadir la cuestión. ¿Daré el Primer Ministro seguridades claras y concretas de que el Gobierno de Su Majestad no concederá la independencia a Rhodesia del Sur hasta el momento en que esté en vigor una nueva Constitución que acepte lo que la presente Constitución rechaza, es decir, los principios de un gobierno democrático? En vista de la incapacidad del Gobierno para resolver este problema... ¿nos dirá el Primer Ministro que va a convocar una Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth* con el fin de llegar a una solución de este problema aceptable para el *Commonwealth*?"

791. No obstante, en la Conferencia de Primeros Ministros del *Commonwealth* celebrada en junio de 1965, el Sr. Wilson se había negado inflexiblemente a que, como habían pedido los Primeros Ministros del *Commonwealth*, se celebrase una Conferencia constitucional en un plazo de tres meses. El 29 de junio de

1965, al informar a la Cámara de los Comunes sobre sus conversaciones con el Sr. Smith, el Sr. Wilson había declarado:

"...si esas conversaciones no progresasen satisfactoriamente en un plazo razonablemente breve, el Gobierno británico estaría dispuesto a considerar la posibilidad de convocar a una Conferencia constitucional a fin de asegurar el progreso hacia la independencia sobre una base aceptable para todo el pueblo de Rhodesia." (Véase *Hansard*, del 29 de junio de 1965.)

792. Era evidente que las conversaciones no habían sido satisfactorias, pero el Sr. Wilson no había hecho nada para que convocase una Conferencia constitucional. Por el contrario, había comprometido al Gobierno del Reino Unido a aceptar la Constitución de 1961 como base para la independencia. En una carta del 29 de marzo de 1965, dirigida a Ian Smith, el Sr. Wilson había declarado:

"Lo que el Gobierno británico desea es una transición pacífica hacia el gobierno de la mayoría, cuyo principio está consagrado en la Constitución de 1961."

793. La afirmación del Sr. Wilson, según la cual en la Constitución de 1961 estaba "consagrado" el principio de la independencia bajo el gobierno de la mayoría, era falsa, pues, en su mayor parte, los africanos no tenían derecho al sufragio y sólo podían obtener 15 escaños en comparación con los 50 que ocupaban los colonos blancos.

794. El Sr. Ian Smith, que en varias ocasiones había expresado su oposición a la idea del gobierno de la mayoría antes de la independencia, había declarado una vez, en una carta dirigida al Sr. Wilson, que "en vista de que estamos resueltos a no aceptar la independencia bajo un gobierno de la mayoría, la conclusión debe ser evidente". Esa declaración, por sí sola, debió ser para el Sr. Wilson un indicio de que el Sr. Smith estaba a punto de declarar unilateralmente la independencia de Rhodesia.

795. En vez de usar los poderes que el Gobierno británico tenía sobre Rhodesia del Sur, el Sr. Wilson se había trasladado a Salisbury en avión para celebrar con el Sr. Smith nuevas conversaciones durante las cuales, según el Libro Azul Británico, había recordado al Gabinete de Rhodesia del Sur que, en la historia moderna, era la primera vez que el Gobierno del Reino Unido había estado dispuesto a considerar la posibilidad de concederles la independencia sobre una base menos estricta que la del gobierno de la mayoría. Eso era una retirada evidente del Sr. Wilson. Ya no se trataba del gobierno de la mayoría antes de la independencia sino de un "progreso garantizado y sin trabas hacia el gobierno de la mayoría", como había declarado en su discurso radiado de 12 de octubre de 1965.

796. Todos estos hechos debían demostrar sin lugar a dudas que el Gobierno del Reino Unido no tenía la menor intención de adoptar ninguna medida eficaz para garantizar el gobierno de la mayoría africana en Rhodesia del Sur. Las pretendidas sanciones económicas contra Rhodesia del Sur habían resultado absolutamente ineficaces, y el Gobierno del Reino Unido había hecho caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Rhodesia del Sur. En todas sus declara-

raciones, y en los discursos que había pronunciado durante sus conversaciones con el Sr. Smith, el Sr. Wilson había hecho hincapié en que "compartía plenamente los deseos del Sr. Smith de contrarrestar la influencia comunista en África". Todas estas y muchas otras acciones del Gobierno del Reino Unido, al que la ZAPU había puesto en evidencia, demostraban claramente cómo el Gobierno colonialista británico había transigido con sus parientes y amigos, los colonos blancos que constituían la dictadura minoritaria de Rhodesia del Sur. El Sr. Wilson no sólo se había negado a insistir en la liberación de todos los prisioneros políticos sino que, por añadidura, en defensa del régimen de Smith, había aclarado categóricamente que éste sólo estaría dispuesto a poner en libertad a los nacionalistas africanos si daban seguridades de que "... en lo sucesivo recurrirían a medios de actuación política exclusivamente constitucionales". El Sr. Mpongo añadió que desearía ocuparse en detalle de la cuestión de los detenidos políticos. Las condiciones propuestas por el Sr. Wilson para la liberación de los dirigentes del país eran engañosas e ineficaces porque, en primer lugar, dadas la ilegalidad y la inconstitucionalidad del Gobierno que actualmente administraba el país, era a todas luces evidente que la represión aplicada a dichos dirigentes por ese régimen alevoso era inhumana e inconstitucional.

797. El pueblo africano de Zimbabwe, que ya tenía bastantes pruebas y temores para creer que la persistente detención de su dirigente, el Sr. Joshua Nkomo, era ilegal e injustificable, y que su vida corría peligro a manos del régimen de Rhodesia, pedía al Comité Especial que adoptase todas las medidas y recursos necesarios para su liberación. Convencidos de que esa persistente detención y represión, que tenía por objeto frustrar tanto su actividad política como su vida personal, privaban al pueblo africano de Zimbabwe de su legítimo dirigente, tenían poderosas razones para temer que fuese asesinado en beneficio de aquellos que lo consideraban su enemigo político. Además, el derecho internacional establecía que nadie debía ser encarcelado sin juicio. Por tal motivo, era preciso examinar la cuestión, y hacer que el mencionado dirigente fuese puesto en libertad o procesado, con lo cual tal vez se sentase un precedente que sirviera para decidir el destino de millares de prisioneros políticos a los que se mantenía detenidos ilegalmente. También era dudoso que ninguna disposición derivada de la Constitución de 1961 siguiese teniendo validez, ya que dicha Constitución había sido derogada y reemplazada por la Constitución de 1965, obra del régimen ilegal de Ian Smith.

798. La ZAPU acusaba al régimen antidemocrático e ilegal de Smith, que era quien en realidad debía ser encausado en lugar del Sr. Joshua Nkomo y sus colegas. Su acusación contra dicho régimen estaba respaldada por millones de africanos de Zimbabwe, a los que aquél infligía sufrimientos inenarrables. Debido a la ilegalidad del régimen vigente en Rhodesia, la ZAPU estaba absolutamente convencida de que el problema debía plantearse ante las autoridades pertinentes del Reino Unido, sobre cuyo Gobierno recaía toda la responsabilidad por la situación reinante en el país. Con las actuales e históricas conversaciones, el Gobierno laborista británico no había hecho sino activar su conspiración con sus parientes y amigos, a fin de encontrar una base para negociar con los rebeldes. Ello venía a

completar la conspiración, la connivencia y el fraude que caracterizaban la crisis de Rhodesia y no dejaba lugar a dudas de que el Reino Unido era responsable no sólo de la declaración unilateral sino, también, del mantenimiento del gobierno ilegal y de las torturas sufridas por la mayoría africana a manos de la minoría.

Declaraciones generales

799. En la 411a. sesión, antes que el Comité Especial reanudase su examen de la cuestión de Rhodesia del Sur en África, el representante de la República Unida de Tanzania formuló una declaración al respecto. Dijo que su delegación había advertido con gran inquietud que el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a entablar supuestas consultas exploratorias con el régimen rebelde de Rhodesia del Sur presidido por Ian Smith. Antes de la declaración unilateral de independencia, el Primer Ministro del Reino Unido había manifestado que esa declaración constituiría un acto de franca rebelión; cuando esa declaración se hizo de todos modos, el Reino Unido había sostenido que las sanciones económicas bastarían para sofocar la rebelión. Esas sanciones habían fracasado y las maniobras últimas para concertar esas consultas entre el Gobierno del Reino Unido y el régimen ilegal de Rhodesia planteaban una serie de cuestiones fundamentales respecto a las cuales la opinión pública mundial tenía derecho a esperar una explicación del Reino Unido.

800. Primero: ¿había que acordar crédito aún a la afirmación del Reino Unido de que la declaración unilateral de independencia era una rebelión contra la Corona? Segundo: ¿el acto de Smith seguía siendo ilegal para el Gobierno del Reino Unido o había adquirido respetabilidad y legalidad con el transcurso del tiempo? Tercero: ¿había que acordar crédito aún a la intención declarada del Reino Unido de sofocar la rebelión? Cuarto: ¿qué carácter tendrían las consultas propuestas? Podría haberse supuesto que en ellas se trataría de la rendición de los rebeldes, pero Ian Smith había dicho al mundo que las consultas constituían una victoria para él. Quinto: ¿era posible que funcionarios del Reino Unido entablasen consultas con un régimen rebelde sin dar al mundo la impresión de estar transando con los culpables? Sexto: ¿era posible que el régimen de Smith negociase para abandonar el poder ahora que se había visto que las sanciones eran un fracaso total?

801. El Gobierno del Reino Unido había hecho caso omiso, no sólo de los indígenas de Rhodesia del Sur sino también de la opinión pública mundial. Era particularmente lamentable que emprendiese el peligroso camino de acordar consultas con los rebeldes después de haber contribuido a hacer fracasar todas las iniciativas de los países africanos que hubieran permitido aplastar al principio la rebelión, en particular la tendencia a que se aplicara totalmente el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En 1910, el Gobierno del Reino Unido había otorgado la independencia en circunstancias análogas, a un grupo minoritario de África del Sur, con supuestas garantías para la mayoría sudafricana; hoy podían verse los tristes resultados de aquella decisión.

802. La principal cuestión que se planteaba en Rhodesia del Sur era la de la independencia bajo el gobierno de la mayoría; con lo que estaba haciendo ahora, el Gobierno del Reino Unido volvía la espalda a esa cuestión. Antes de asumir su actual cargo, Lord Ca-

radon, Representante Permanente del Reino Unido, había dicho en un artículo que los dirigentes europeos de Africa fracasaron cuando tuvieron oportunidad de conquistar la confianza de los africanos, y que se dejó pasar la oportunidad de establecer una colaboración entre blancos y negros en Rhodesia del Sur por ceguera y obstinación de Salisbury y falta de valor político de Londres. Había añadido que las cosas habían llegado tan lejos que era difícil ver cómo podía detenerse la corriente sin recurrir a la violencia.

803. Si el Gobierno del Reino Unido no había abandonado aún el principio del gobierno de la mayoría y su propósito de sofocar la rebelión y hacer volver el país a la constitucionalidad, su delegación se sentía obligada a declarar que el Gobierno del Reino Unido no estaba cumpliendo su propósito. La ceguera y la obstinación, y además, falta de valor político, prevalecían en Londres cuando se trataba de satisfacer las demandas de los africanos de Rhodesia y de la opinión mundial, y en esa forma se aceleraba cada vez más la corriente hacia la violencia. El mundo tenía derecho a que el Gobierno del Reino Unido le dijese qué índole y qué carácter jurídico tenían las llamadas consultas que se estaban celebrando secretamente en Londres.

804. El representante del Reino Unido manifestó que deseaba corregir algunas de las declaraciones que se habían hecho acerca de las conversaciones que se estaban celebrando en Londres. Como había expuesto recientemente el Primer Ministro del Reino Unido en el Parlamento, se estaban celebrando conversaciones oficiosas para tratar de descubrir si existía alguna base de negociación. El citado representante señaló también a la atención de los miembros del Comité las otras razones dadas por el Primer Ministro del Reino Unido en su reciente declaración (véanse los párrs. 628 a 632, *supra*).

805. El representante de la República Unida de Tanzania convino con el representante del Reino Unido en que hacían falta unas discusiones honradas y directas. Sin embargo, no era honesto que el Gobierno del Reino Unido celebrase conversaciones con los representantes de un régimen que había declarado rebelde y traidor. Precisamente porque las declaraciones de la delegación del Reino Unido no correspondían a los hechos, el representante de la República Unida de Tanzania había planteado ciertas cuestiones que se habían de contestar en el Comité o en otra parte.

806. El Gobierno del Reino Unido, que tanto tiempo llevaba predicando la cooperación racial, estaba sacrificando la justicia al color en Rhodesia del Sur, donde la mayoría oprimida era africana. De poco consuelo servía a la población de los territorios dependientes del Reino Unido que se le dijera que millones de gentes de otros territorios habían alcanzado la independencia.

807. Los representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Malí y Etiopía se sumaron a las opiniones expresadas por el representante de la República Unida de Tanzania.

808. En la 418a. sesión, que se celebró en Dar es Salaam, el Presidente señaló a la atención del Comité Especial un cable procedente de la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas en Nueva York sobre las últimas medidas del Consejo de Seguridad en relación con la cuestión de Rhodesia del Sur, del cual se habían distribuido copias a los representantes. En el Consejo de Seguridad, el proyecto

de resolución presentado por Malí, Nigeria y Uganda había obtenido 8 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, por lo que no se había logrado su aprobación.

809. El Presidente dijo que este resultado, aun siendo desalentador, debía considerarse como una victoria moral y brindar al Comité el ímpetu necesario para redoblar los esfuerzos a este respecto. El hecho de que nada menos que seis miembros hubiesen votado a favor del proyecto de resolución constituía una fuente de aliento, lo mismo que las declaraciones de los miembros que habían insistido en la necesidad de tomar medidas para asegurar el derecho de la población africana a la libre determinación y a la independencia.

810. La inutilidad de las medidas adoptadas por el Reino Unido, que no eran sino un simple expediente para no ocuparse de la raíz del problema, se había hecho patente desde hacía tiempo. A decir verdad, en vez de emprender negociaciones con miras a la aplicación de las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, el Reino Unido se había limitado a conversaciones "exploratorias" con el régimen rebelde. Esto no podía conducir más que a la legalización de la situación existente y al mantenimiento de un *statu quo* que era totalmente inaceptable para la mayoría de la población de Rhodesia.

811. Por consiguiente, el Comité Especial tenía obligación, de conformidad con su mandato y con sus propias decisiones al respecto, de examinar de nuevo la cuestión de Rhodesia teniendo en cuenta los recientes acontecimientos. De este modo contribuiría, en armonía con los deseos de las Naciones Unidas y de la opinión mundial, a la solución del problema.

812. El representante de la India pasó revista a los acontecimientos que habían conducido a la mayor injuria: el Gobierno del Reino Unido, luego de una serie de maniobras encaminadas a engañar a la opinión mundial, acababa de iniciar conversaciones con el régimen de Smith después de haber declarado resueltamente hacía sólo unos pocos meses que no lo haría. Al obrar así estaba sin embargo subestimando la inteligencia de todo el mundo y aún la de su propio pueblo.

813. Tres eran los hechos importantes que se destacaban: en primer lugar, las sanciones habían fracasado; en segundo lugar, el Reino Unido y sus partidarios no tenían intención, por lo menos por ahora, de adoptar medidas más energéticas contra Rhodesia; y, en tercer lugar, el régimen de Smith estaba desafiando a la opinión mundial y afianzando su posición. Aunque el representante de la India no quería sugerir que el Gobierno del Reino Unido estuviese prolongando deliberadamente un régimen que en forma arrogante había ridiculizado su autoridad, ese Gobierno estaba empero influenciado por la preocupación de sus parientes y amigos, actitud que, si bien comprensible, no se podía defender moralmente. El Reino Unido argüía también que las sanciones económicas eran preferibles al empleo de la fuerza, pero era evidente que las sanciones no tenían objeto alguno si continuaba el comercio.

814. Los otros dos asociados de Rhodesia blanca en el proceso de afianzamiento colaboraban en forma flagrante y agresiva. Los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal se encontraban en la vanguardia de todo

movimiento encaminado a trastocar el curso de la historia. Deberían ser desterrados por el mundo por su abominable conducta; y había sin embargo gobiernos que seguían asociados con ellos. Una gran Potencia de Asia había aumentado aún su comercio con Sudáfrica en los últimos años, no obstante su declarada preocupación por las razas explotadas del mundo. Ya no bastaban las palabras de consuelo del Reino Unido, ni se aceptaban sus pretensiones de sanción. Si había de ahorrarse al Africa y al resto del mundo un conflicto racial sangriento, habría que tomar medidas eficaces.

815. La posición de la India en contra del racismo era bien conocida. Hacía muchos años que había tomado la iniciativa forzando a los colonialistas portugueses a salir del territorio de la India cuando no produjeron efecto las persuasiones. Como primer país en romper toda relación con el régimen de Smith, había dado una prueba tangible de su apoyo por el pueblo africano de Rhodesia del Sur.

816. El Comité Especial debía formular un llamamiento al Reino Unido, responsable de la situación en Rhodesia del Sur, para que tomase medidas eficaces. El Comité debía también expresar claramente que su aversión por el uso de la fuerza no podía aprovecharse para, escudar un régimen criminal que era preciso eliminar, y que todos los Miembros de las Naciones Unidas debían decidir si deseaban apoyar a Portugal y Sudáfrica o unirse al vasto grupo de naciones que respetaban al ser humano y el imperio de la ley.

817. Finalmente, señaló a la atención del Comité Especial el programa de seis puntos que la delegación de la India había presentado al Consejo de Seguridad el 17 de mayo de 1966.

818. El representante de Etiopía deploró el resultado de la reciente votación del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Rhodesia. Desde un principio su delegación se había sentido profundamente preocupada por la actitud de las Potencias occidentales, y principalmente del Reino Unido, con respecto a Rhodesia del Sur; los africanos estaban cansados de lugares comunes y se les había acabado la paciencia.

819. Una y otra vez, la delegación de Etiopía había declarado que sólo mediante la fuerza podía derrocar un régimen rebelde despiadado, como el que se encontraba instalado en Salisbury. Sin embargo, como lo había declarado el Emperador Haile Selassie I en su mensaje en el Día de Africa, parecía que por ahora no podía esperarse medida semejante por parte del Reino Unido. En tales circunstancias, al pueblo africano de Zimbabwe no le quedaba más recurso que recurrir a las armas a fin de adquirir su independencia. Al obrar así contaría con el apoyo de los africanos y de los pueblos del mundo entero amantes de la libertad.

820. La crisis de Rhodesia contenía todos los elementos de un conflicto racial. A menos que se la controlase, no sólo Africa sino todo el mundo podía estar en peligro. Se debía advertir al Reino Unido y a sus partidarios que al sacrificar principios para apaciguar a una minoría de Rhodesia del Sur, incurrían en el riesgo de perder la buena voluntad del pueblo en Africa, Asia y en el resto del mundo. Sin embargo, estaba pasando el tiempo y había que elegir entre la minoría racista de Smith y el resto del Africa.

821. Su delegación estaba persuadida de que el pueblo africano de Zimbabwe conquistaría pronto su libertad, por brutal que fuese la opresión y por ardua la lucha que hubiese que entablar. Todos los pueblos progresistas apoyarían a Zimbabwe en tales objetivos, y Etiopía, lo mismo que los demás países independientes de Africa, no descansaría hasta que se hubiese derrocado al régimen rebelde de Ian Smith y liberado al pueblo de Zimbabwe.

822. Finalmente, era de esperar que al presentar sus recomendaciones a la Asamblea General, el Comité lograría un acuerdo unánime sobre medidas eficaces para hacer frente a la situación de Rhodesia.

823. El representante del Irak declaró que la situación del pueblo de Zimbabwe tenía un significado especial para el mundo árabe, pues le servía de vivo recuerdo de la violenta ocupación de Palestina por parte de colonos extranjeros alentados por el sionismo y colonialismo internacional. La tragedia de los árabes de Palestina había ocurrido no obstante la existencia de las Naciones Unidas y la conciencia del pretendido mundo civilizado. No debía exponerse al pueblo de Rhodesia del Sur a sufrir una suerte semejante.

824. En sus declaraciones, los peticionarios habían revelado el hecho alarmante de que más de 34.000 habitantes de Zimbabwe se encontraban detenidos en prisiones o campamentos y que los colonos poseían un ejército de más de 40.000 hombres, lo que constituía una real amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

825. Las sanciones económicas habían fracasado tristemente debido a la cooperación que prestaban Potencias como Portugal y Sudáfrica al régimen racista de Rhodesia. El embargo sobre el petróleo impuesto por la Potencia administradora se había evadido mediante importaciones de petróleo de Sudáfrica. Las numerosas consultas celebradas entre el régimen colonialista y la Potencia administradora, tanto antes como después de la declaración unilateral de independencia, no habían producido resultado positivo alguno. Sin embargo, se había sabido hacía poco que se estaban celebrando nuevas conversaciones secretas en Londres que se reanudarían, informaba la prensa, en Salisbury en el curso de la semana.

826. Como resultado de las maniobras de la Potencia administradora y de sus partidarios, una reciente resolución presentada al Consejo de Seguridad por los miembros africano-asiáticos no había contado con el número necesario de votos. Dicha resolución, en la que se pedía al Reino Unido que interviniese en conformidad con las disposiciones del Capítulo VII de la Carta, habría ayudado al pueblo de Zimbabwe en su lucha por la libertad e independencia.

827. Como lo había señalado la delegación del Irak en muchas oportunidades y específicamente en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, poco antes de la declaración unilateral de independencia, la Potencia administradora era la única responsable de Rhodesia del Sur. En realidad, ella misma había reivindicado varias veces tal responsabilidad, como por ejemplo en octubre de 1965, cuando declaró que la declaración unilateral era un acto de rebelión.

828. La persistencia de la situación anormal de Rhodesia del Sur estaba complicando las relaciones políticas y económicas de Africa con el resto del mun-

do. Por ejemplo, según los informes de la prensa, el régimen de Smith había impuesto nuevas restricciones a las exportaciones de cobre de Zambia que pasaban a través de Rhodesia del Sur. Zambia había rechazado sin embargo tales restricciones y había tenido que encontrar otra ruta. El régimen racista había sobrevivido hasta ahora a los efectos de las sanciones debido a la falta de firmeza por parte de la Potencia administradora. No se toleraría sin embargo que esta situación continuase indefinidamente: el pueblo de Africa se vería forzado a prepararse para cualquiera eventualidad, incluso una guerra de liberación.

829. El Vicepresidente de Tanzania se había referido a dos *desiderata* básicos para resolver el problema de Rhodesia: la derrota del régimen ilegal y el compromiso de que Rhodesia del Sur sólo aceptaría la independencia a base del principio de la mayoría. Su delegación estimaba que el Comité Especial y las Naciones Unidas no debían escatimar esfuerzo alguno para lograr tales objetivos.

830. El representante de Malí observó que la falta de una respuesta del Gobierno británico al telegrama que el Comité Especial le había enviado el viernes último mostraba, una vez más, la actitud negativa del Reino Unido con respecto a la cuestión de Rhodesia.

831. La situación existente en Rhodesia del Sur había preocupado siempre a los países africanos. Desde que la minoría racista dirigida por el Sr. Smith proclamó unilateralmente la independencia, el problema había cobrado proporciones excepcionales y amenazaba gravemente la paz y la seguridad de Africa. Era verdad que el Gobierno del Reino Unido había hecho declaraciones de intención. Se había declarado dispuesto a circunscribir el peligro para tratar de poner fin a una situación que no le hacía honor, pero ese Gobierno era el autor de toda la crisis de Rhodesia y el que voluntariamente la había complicado en la esperanza de salvaguardar los intereses británicos y la presencia inglesa en esa región de Africa. ¿Cómo explicar el comportamiento del Reino Unido en Rhodesia del Sur de otra manera que por su negativa a evaluar objetivamente la situación? La Potencia administradora no podría mantener su presencia alentando y ayudando al Sr. Smith a comportarse como lo hace frente al pueblo de Zimbabwé. A decir verdad, el Gobierno de Wilson no sólo no tomaba ninguna medida para imponer la legalidad en el país, sino que llegaba incluso al extremo de tener a sueldo a un puñado de colonos blancos, que había usurpado el poder a despecho de todas las leyes humanas y de los derechos del hombre. La Potencia administradora no podría tampoco salvaguardar sus intereses en Africa apoderándose de las tierras productivas del pueblo de Zimbabwé ni estableciendo por conducto de los colonos que ella misma había llevado al territorio el odioso sistema del apartheid y la furiosa explotación del hombre por el hombre.

832. No cabía duda alguna de que la pandilla de Ian Smith no se habría mantenido en el poder contra la voluntad de cuatro millones y medio de negros si el Reino Unido no hubiera utilizado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para facilitar a la minoría de colonos blancos el traspaso de fuerzas armadas y de policía, dando así a esa minoría los medios de lograr la independencia a costa del pueblo de Zimbabwé. El Comité Especial debía analizar este aspecto de la cuestión y preguntarse por qué el Reino

Unido actuaba así, mientras que en los demás territorios colocados bajo su jurisdicción desplegaba por el contrario su potencia militar contra los jefes amados de su pueblo que reclamaban la independencia para su país. La única respuesta a esta pregunta era que el Gobierno británico se dejaba guiar por consideraciones de orden económico y militar. Todos los peticionarios que se habían presentado ante el Comité Especial habían insistido en ese aspecto de la cuestión. Rhodesia del Sur poseía riquezas y el Reino Unido, que creía sin duda no haber explotado suficientemente a ese país, no había hallado otra solución para perpetuar esa situación que conceder una supuesta autonomía a su colonia en 1923. De allí venía todo el mal. ¿Quién se había beneficiado de esa autonomía? Un puñado de 200.000 colonos blancos sobre una población de cerca de 5 millones de habitantes; cabía, pues, preguntarse dónde estaban la legalidad y la justicia. Esta política era condenable y el Reino Unido debiera sin tardanza restablecer la legalidad en el país. A ese Gobierno le incumbía, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y la integridad del territorio.

833. De una manera extraña, el caso de Rhodesia preparaba otra Africa del Sur. Habiéndose fijado este objetivo, el Reino Unido se dedicaba metódicamente a realizarlo. Era de lamentar que la delegación británica no participase en los trabajos del Comité Especial, pues habría sido interesante haberle escuchado tratando de refutar esa afirmación. Aunque sabía perfectamente que todos los Estados del mundo condenaban esta política, el Reino Unido había permitido que el Sr. Smith contrajese en nombre de Rhodesia del Sur una alianza impía con Portugal y Africa del Sur. Gracias a este apoyo prestado a Rhodesia del Sur el Sr. Smith había podido, el 11 de noviembre último, proclamar unilateralmente la independencia.

834. El Reino Unido se había contentado con dirigir un llamamiento al Consejo de Seguridad para pedir el bloqueo económico de su colonia. Luego, el Sr. Smith, seguro del apoyo de Africa del Sur y de los medios financieros británicos, había podido afianzar su posición. Era verdad que el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución 217 del 20 de noviembre de 1965 en la cual pidió a todos los Estados la imposición de un embargo sobre el petróleo, pero Rhodesia no había dejado de seguir recibiendo regularmente petróleo procedente de Africa del Sur. Según el *Times* de Londres del 28 de febrero de 1966, el *Financial Times* del 21 de febrero de 1966 y el *Times* de Zambia del 3 de marzo de 1966, la Compagnie CENTA transportaba diariamente a Rhodesia del Sur de treinta a cuarenta mil galones de petróleo por la carretera o por el ferrocarril del Norte del Transvaal. ¿Qué medidas concretas había tomado la Potencia administradora para poner fin a tal violación de la frontera de Rhodesia? Por otra parte, según el *Financial Times* del 3 de marzo de 1966, los reglamentos sobre la entrada al Reino Unido de tabaco procedente de Rhodesia en virtud de contratos celebrados el 31 de enero de 1966, habían permitido que las importaciones procedentes de Rhodesia del Sur en el Reino Unido alcanzaran en enero de 1966 la cifra máxima de 3.800.000 libras esterlinas en lugar de 3.100.000 libras esterlinas en enero de 1965.

835. Cuando el Sr. Wilson había enviado a sus emisarios al Sr. Smith para pedirle que reanudase

el diálogo con él, y cuando este último, al acceder a esta petición, había declarado que la cuestión de la independencia de Rhodesia del Sur, fundada en la Constitución de 1961, no podría estar otra vez en juego, el Gobierno británico había traicionado de nuevo a los cuatro millones y medio de naturales de Zimbabwe. El Comité Especial debía condenar, como lo había hecho el Presidente Kaunda de Zambia, esta parodia de negociaciones que se llevaba a cabo en Londres y que, según los despachos de prensa, había de continuarse en Rhodesia del Sur. La actitud del Gobierno de Londres seguía siendo esencialmente subjetiva y estaba dictada por la preocupación de preservar los intereses financieros británicos en Rhodesia del Sur y de perpetuar sobre todo la supremacía blanca en esa parte de África. Sin duda alguna, el Gobierno británico había fracasado en su misión de Potencia administradora con respecto al pueblo de Zimbabwe, que esperaba su liberación. Este pueblo oprimido no tenía ya otra opción que recurrir a la violencia para liberar a su país. La sangre había corrido en Rhodesia y correría otra vez si las Naciones Unidas no obligaban a la Potencia administradora a intervenir para imponer la legalidad en el país. Las declaraciones de intención no bastaban ya, los pueblos que luchaban esperaban actos.

836. Era lamentable que el Consejo de Seguridad hubiese rechazado el proyecto de resolución presentado por los Estados africanos para pedir al Reino Unido que utilizase la fuerza a fin de poner término al régimen inicuo instalado en Salisbury. Al actuar así, el Consejo de Seguridad había contraído una responsabilidad muy grave, pues favorecía el establecimiento en Rhodesia del Sur de un régimen parecido al de África del Sur.

837. La actitud del Gobierno británico permitía además que el Sr. Smith atentase contra los intereses de un Estado soberano, Zambia. En efecto, según los despachos de prensa, las empresas monopolistas de Rhodesia del Sur impedían que el cobre zambiano llegase al puerto de Beira a través de Rhodesia del Sur, lo que constituía una nueva traición del Gobierno británico al mantener al pueblo zambiano bajo la dependencia económica de los monopolios establecidos en Rhodesia del Sur. Era inadmisibles que Zambia tuviese que sufrir las consecuencias de una política retrógrada insensible a la evolución del mundo actual. Por este motivo, el Gobierno británico, al cual incumbía velar por la seguridad en esa parte de África, debía tomar sin tardanza las medidas necesarias para imponer la legalidad en el Territorio.

838. Por su parte, el Comité Especial debía, en primer lugar, reafirmar el derecho inalienable del pueblo zimbabwense a la libre determinación y a la independencia, como lo preveía la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Luego debía pedir a todos los Estados que prestasen ayuda material al pueblo de Zimbabwe en la lucha sagrada en que estaba empeñado para obtener su independencia. Debería además recomendar al Secretario General de las Naciones Unidas que convocara a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta estudiase la grave situación que reinaba en las colonias británicas y portuguesas y que era la consecuencia del régimen de apartheid vigente en África del Sur y en Rhodesia del Sur.

839. Entre tanto, era indispensable que el Consejo de Seguridad buscase una solución que obligase al

Reino Unido a salvaguardar los intereses del pueblo de Zimbabwe, así como los del pueblo zambiano. La delegación de Malí apoyaría cualquier proyecto de resolución en ese sentido.

840. El representante del Afganistán dijo que el Consejo de Seguridad, al rechazar el proyecto de resolución presentado por tres países africanos, había contribuido al empeoramiento de la situación en Rhodesia del Sur. Este proyecto de resolución estaba perfectamente justificado, ya que ponía en evidencia que las recomendaciones de la Asamblea General tenían muy poca posibilidad de ser aplicadas. Igualmente, el embargo del petróleo propugnado por el Consejo de Seguridad había resultado inadecuado. La declaración de independencia — que pudo haberse impedido — ponía al régimen de Smith en una posición incluso más fuerte para oprimir al pueblo de Zimbabwe; esa declaración era incompatible con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

841. El Reino Unido sabía que la creciente colusión entre África del Sur, Portugal y el régimen de Smith menoscababa el porvenir del pueblo de Zimbabwe y la causa del principio de la mayoría. Si la Potencia administradora no actuaba enérgicamente frente a esta crisis, la situación podía llegar a ser súbitamente incontrolable. La delegación de Afganistán, en principio, no se oponía a las actuales negociaciones entre el régimen rebelde y el Reino Unido, que tenía la responsabilidad legal y los medios necesarios para resolver la situación anormal; la falta de progreso había llevado al escepticismo.

842. Era innegable que la única solución consistía en que el Reino Unido derrocara al régimen rebelde y concediese la independencia en virtud de una Constitución democrática que garantizase el gobierno de la mayoría. Cualquier solución que no correspondiese a este objetivo sería inoperante e incompatible con el derecho del pueblo de Zimbabwe a la libre determinación.

843. La delegación del Afganistán abrigaba la esperanza de que prevaleciese el sentido común y la comprensión y encarecía al Comité Especial que señalase una vez más a la atención del Consejo de Seguridad la verdadera situación en Rhodesia del Sur.

844. El representante de la República Unida de Tanzania declaró que mientras se mantuviera el régimen de Smith, el Comité Especial y las Naciones Unidas debían proseguir sus esfuerzos para lograr una solución; de lo contrario, la fe que el pueblo de Zimbabwe y de África tenía en las Naciones Unidas se debilitaría. En efecto, ya había comenzado a disminuir, y cada nuevo golpe confirmaría la opinión de quienes pensaban que sólo un derramamiento de sangre podría liberar a África. El Comité Especial por lo tanto tenía una gran responsabilidad para con el pueblo de Zimbabwe en el sentido de restablecer su fe en las Naciones Unidas y hacer que los principios enunciados en la Carta se convirtiesen en realidad para ellos.

845. La lucha en Rhodesia del Sur iba a ser una lucha encarnizada, debido, por lo menos, a dos injusticias importantes que sufría el pueblo africano: la magnitud de la discriminación racial bajo un gobierno minoritario, y la perpetuación del colonialismo ante la negativa del Reino Unido de aplastar la rebelión. La declaración unilateral de independencia había sido

en sí una violación de la Constitución de 1961. El Gobierno del Reino Unido por lo tanto tenía un vacío que llenar, pero eludía sus responsabilidades. Pero la ironía de la cuestión era que el mismo Gobierno había estado proclamando que era el único responsable de Rhodesia del Sur.

846. Las Naciones Unidas debían obrar sin demora. Leyes como la *Land Apportionment Act* y las leyes de salvoconductos eran un trasplante del tipo de discriminación de África del Sur.

847. No se podía aceptar pasivamente la complicidad y la condonación del Gobierno del Reino Unido, que se había tomado la molestia de proclamar que era el único responsable en Rhodesia del Sur.

848. Los africanos acusaban al Reino Unido de llegar a una transacción con los racistas minoritarios de Rhodesia del Sur y denunciar que la declaración de independencia era "unilateral" a fin de engañar al mundo y desviar la atención para oscurecer la cuestión de que verdaderamente se trataba, a saber, el colonialismo. Si a los ojos de los británicos el Sr. Smith era un rebelde, tendría que haber sido detenido y juzgado por rebeldía. En cambio había ido a Londres y había regresado sin ninguna molestia, a pesar de que había amenazado con declarar la independencia. El Reino Unido había declarado que era el responsable de Rhodesia del Sur, y sin embargo permitía que los nacionalistas africanos siguiesen en la cárcel por "terrorismo" en tanto que el Sr. Smith y sus cómplices eran simplemente rebeldes que gozaban de impunidad. La cuestión tenía solamente dos aspectos: el pueblo africano de Rhodesia del Sur; y la potencia colonial y la minoría racista de colonos que servían intereses extranjeros.

849. El Reino Unido había pasado por alto las demandas africanas de aplastar la rebelión, pero no había dejado de utilizar al Consejo de Seguridad para servir sus propios fines. Cuando la Federación comenzó a deshacerse en 1963, los Estados Miembros africanos de las Naciones Unidas presentaron una resolución que tenía por objeto impedir el traspaso de las fuerzas aéreas a la minoría blanca de Rhodesia del Sur; pero el Reino Unido usó su veto. Si el Sr. Smith estaba afianzando su régimen, ello se debía al apoyo que le daba un ejército experimentado, una fuerza aérea y los agentes de policía, que habían recibido o seguían recibiendo pensiones del Gobierno.

850. Aun después de la declaración unilateral de independencia, el Reino Unido y sus aliados habían impedido desvergonzadamente la aplicación de las sanciones obligatorias y el uso de la fuerza previsto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se permitía que el régimen de Smith se afianzase iniciando al hacerlo un reino de terror y de muerte.

851. Mucha gente de buena voluntad se había preguntado por qué el pueblo africano de Rhodesia del Sur no se había sublevado contra el régimen ilegal. De hecho había una valiente oposición, pero, debido a una censura estricta, casi no llegaba noticia alguna al mundo exterior. Sin embargo, la delegación de Tanzania podía citar varios incidentes que confirmaban que había resistencia activa. Había que recordar que se necesitaron cinco años y el esfuerzo de cientos de millones de personas para aplastar al régimen de Hitler.

852. Las consecuencias funestas de la situación cruzaban las fronteras de Rhodesia del Sur. Habían pasado

seis meses desde la declaración unilateral de independencia, y los indicios mostraban que África del Sur y Portugal estaban haciendo todo lo posible para mantener el régimen. Esa alianza seguiría anulando los esfuerzos de las Naciones Unidas de imponer sanciones económicas optativas u obligatorias.

853. El régimen ilegal ejercía también efectos nocivos en otros Estados africanos independientes. Había tratado de conservar a Zambia como rehén, pero se había visto amargamente defraudado por la valiente actitud del Dr. Kaunda y de su pueblo. El Gobierno rebelde había amenazado con expulsar a todos los zambianos de Rhodesia del Sur; al fracasar esa maniobra había subido el precio del carbón e insistido en que se le pagara en moneda fuerte; cuando también eso fracasó, pensó en los ferrocarriles y exigió que se pagase por adelantado en efectivo todos los fletes. También eso había sido contrarrestado por la valiente actitud del Dr. Kaunda. El representante de Zambia pidió al resto de África que ayudase a Zambia; porque estaba seguro de que los sacrificios que realizaba los realizaba por el pueblo de Zimbabwe y la dignidad del África. La mayor ayuda que los africanos podían dar a Zambia era derrocar el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Como cualquier otra solución sería una medida a medias, su delegación seguiría insistiendo en el uso de la fuerza como único medio de poner fin a la rebelión. Mientras tanto, los Estados africanos independientes podían ayudar a Zambia a hallar otras salidas para sus exportaciones.

854. Los africanos habían previsto el fracaso de las sanciones. El Gobierno del Reino Unido había dado gran publicidad a la cuestión de los dos petroleros en Beira; sin embargo, sabía que diariamente se suministraban grandes cantidades de petróleo a través de Bechuania. Si el Reino Unido y el Consejo de Seguridad hubiesen sido sinceros en la cuestión de las sanciones, habrían aplicado la sugestión africana de cerrar las fronteras de Rhodesia del Sur. Las sanciones estaban fracasando porque los británicos no querían que tuviesen éxito y, en efecto, las anulaban, por ejemplo, importando tabaco de Rhodesia a través de África del Sur como exportación sudafricana.

855. El pueblo de Zimbabwe necesitaba amigos prácticos y sinceros inmediatamente. Por lo tanto, los africanos habían recibido un golpe con el voto de Nueva Zelandia en contra de la resolución que habían presentado en el Consejo de Seguridad. El representante de la República Unida de Tanzania esperaba que Nueva Zelandia nunca necesitase el apoyo de África.

856. La Organización de la Unidad Africana (OUA) tenía el deber de lograr que se derrotase al régimen de Smith y de que el régimen no obtuviese el reconocimiento *de facto* del Reino Unido.

857. Su delegación proyectaba presentar al Comité Especial, en su actual período de sesiones, un proyecto de resolución en el que se instaría a: 1) la liberación de todos los presos políticos; 2) el reconocimiento de la legitimidad de la lucha del pueblo de Zimbabwe; 3) la suspensión de la Constitución de 1961 y la cesación de todas las prácticas discriminatorias; 4) la condena de apoyo dado a Rhodesia del Sur por Portugal y África del Sur; 5) la formación de una fuerza policial para cerrar las fronteras de Rhodesia del Sur; 6) la organización por parte del Reino Unido de una elección general basada en el voto de

la mayoría, fiscalizada por las Naciones Unidas; 7) un llamamiento a todos los países para ayudar a Zambia; y 8) la aprobación por parte del Reino Unido de todas las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza, para aplastar el régimen racista.

858. El representante de la Costa de Marfil manifestó que era inútil reexaminar todos los elementos de la cuestión de Rhodesia del Sur y que bastaba con observar que el régimen ilegal del Sr. Ian Smith existía todavía e inclusive se estaba robusteciendo. La rebelión de Rhodesia no había sorprendido a los africanos, que la preveían desde la aprobación en 1961 de la constitución racista y el rompimiento, en 1963, de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Se sabía que entonces los países africanos habían señalado a la atención del Reino Unido el peligro que constituía el traspaso de las fuerzas armadas y de la aviación a las manos de la minoría racista de Rhodesia del Sur. Pero el Reino Unido no había atendido esas advertencias y, por primera vez en su historia, una Potencia colonial había dado a una colonia el medio de asegurar su propia defensa, poniendo así a cuatro millones de rhodesianos a merced de un puñado de colonos blancos racistas.

859. Los países africanos sin embargo habían seguido manteniendo su confianza en las Naciones Unidas. Desgraciadamente, todos los esfuerzos hechos por las Naciones Unidas y países amigos no habían dado ningún resultado, y la evolución de las negociaciones entre el Reino Unido y el régimen del Sr. Smith era alarmante. Nunca, en la memoria de los países coloniales se había visto a un gobierno metropolitano suplicar a sus súbditos que no proclamasen la independencia y plegarse después a sus exigencias en la forma que se había visto. Este comportamiento no podía menos que alentar al Sr. Smith a continuar su odiosa labor. Una vez más, el Gobierno del Reino Unido había abandonado a los africanos, dejándolos sin defensa entregados a un grupo de energúmenos que se proponían mantenerlos sometidos a perpetuidad en nombre de la civilización occidental. Por eso los africanos, que todavía recordaban los sucesos de Stanleyville de noviembre de 1964, tenían el deber de socorrer a sus hermanos. Si no lo habían hecho hasta ahora, era porque no querían entorpecer la acción del Reino Unido, que trataba de acabar rápidamente con la rebelión. Pero ahora había que reconocer que había fracasado y que sólo quedaba recurrir a las disposiciones del Artículo 42 del Capítulo VII de la Carta, es decir, a la fuerza, único medio según parecía de transferir en forma ordenada los poderes de las autoridades coloniales a los pueblos de los territorios interesados. El propio Arzobispo de Canterbury había declarado que el fracaso de las sanciones económicas justificaba el empleo de la fuerza para imponer el derecho y mantener el orden, cuando evidentemente era posible llegar a él por este medio.

860. El Gobierno del Reino Unido debía actuar con rapidez si quería evitar una guerra racial en Africa, porque la acción del Sr. Smith no era una acción aislada: formaba parte de un plan general de opresión de Africa en el que participaban los regímenes racistas de Africa del Sur, Portugal y Rhodesia del Sur. El hecho de que el Consejo de Seguridad hubiese rechazado la propuesta de recurrir al uso de la fuerza demostraba que el reconocimiento del régimen fascista de Rhodesia del Sur ya se había iniciado, puesto

que el Reino Unido había iniciado negociaciones con un simple señor particular que no tenía ninguna clase de autoridad legal. Era difícil creer que se pudiese llegar a resolver el problema por la negociación; ni el pueblo de Zimbabwe, ni los países africanos independientes podían admitir una solución de transacción, que equivaldría a reconocer de hecho el régimen racista de Rhodesia del Sur.

861. En consecuencia, los países africanos estimaban que había que acabar con el régimen rebelde por todos los medios, incluido el uso de la fuerza, y hacían un llamamiento a todos los pueblos democráticos y pacíficos para que exigiesen al Reino Unido que tomase las medidas necesarias para controlar de nuevo la situación en Rhodesia del Sur y preparar la concesión de la independencia al pueblo de Zimbabwe. Ya había pasado el momento de declarar intenciones; había que pasar a los hechos, porque estaban en juego la paz y la seguridad internacionales.

862. El representante de Túnez dijo que la cuestión de Rhodesia del Sur preocupaba a las Naciones Unidas y las seguiría preocupando mientras no hubiesen hallado el medio de ayudar eficazmente al pueblo de Zimbabwe a recobrar su derecho legítimo a la libertad y a la independencia. Recordó los términos del párrafo 5 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, aprobada por unanimidad. Desde entonces, las numerosas resoluciones que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad habían dedicado a esta cuestión nunca se habían aplicado, ni siquiera parcialmente. Muchas veces, el Reino Unido había reivindicado todas las responsabilidades en lo que respectaba a Rhodesia del Sur. Pero se comprendía ahora que esta actitud no era sino un hábil subterfugio tendiente a mantener el *statu quo* y a alentar a los colonos blancos a perseverar en sus intenciones criminales. El Reino Unido, cuya actitud valerosa había que recordar cuando se trataba, en el caso de otros Territorios, de transferir los poderes a la mayoría, preconizaba el uso en Rhodesia del Sur de medios falaces, como la negociación y las sanciones económicas.

863. De tal modo, menospreciando resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, menospreciando la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio democrático de la mayoría, menospreciando hasta a la opinión pública internacional, una minoría oprimía a más de 4 millones de personas cuyo único deseo era vivir con dignidad y paz.

864. Las Naciones Unidas y el Comité Especial tenían el derecho de incapacitar en el plazo más breve posible a este régimen criminal y desenmascarar los actos tortuosos de los países que, mientras manifestaban su amistad a los pueblos que luchaban por su liberación, entregaban subrepticamente armas y municiones a las Potencias retrógradas que querían imponer su dominio a Africa.

865. Pero se sabía que un gobierno, por fuerte que fuese, no podía mantenerse en el poder si no era apoyado por la masa. Por ello Túnez estimaba que, a pesar de la injusticia y la opresión militar y policial, el pueblo de Zimbabwe, gozando del apoyo internacional, debía levantarse para volver a conquistar lo que le correspondía. Túnez lo sostendría en su lucha, porque sabía que ningún régimen colonialista dejaría de actuar como dueño absoluto mientras no sintiera amenazada su seguridad.

866. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas debían hacer presión sobre el Reino Unido para obligarlo a actuar; el Comité Especial debía presentar a la Asamblea General propuestas concretas tendientes a señalar a la atención de la opinión pública este trágico problema y ayudar a las Naciones Unidas a salir del estancamiento. Túnez apoyaría sin reserva toda propuesta constructiva que tendiese a liberar a la mayoría africana de la opresión de la minoría y a salvaguardar la paz y la justicia en el continente africano.

867. El representante de Dinamarca expresó su pesar de que la rebelión en Rhodesia del Sur no hubiese sido aplastada. Entendía perfectamente la creciente impaciencia de los africanos, pero era indispensable actuar en armonía. Había acuerdo general acerca de la necesidad de eliminar el apartheid en África del Sur y acabar con el régimen de Smith en Rhodesia del Sur. La cuestión de Rhodesia del Sur debía atenderse primero, pues era el problema que podía resolverse más fácilmente.

868. Dinamarca reconocía la responsabilidad que tenía el Reino Unido de resolver el problema, pero también las Naciones Unidas tenían una responsabilidad, puesto que el asunto había sido internacionalizado al ser transmitido a este órgano. El objetivo inmediato del esfuerzo común debía ser eliminar este régimen reprochable, pero el propósito último era obtener un Zimbabwe independiente basado en el gobierno de la mayoría, que probablemente se conseguiría en forma más eficaz mediante el gobierno directo del Reino Unido durante un período de transición. Dinamarca lamentaba profundamente la división en el Consejo de Seguridad con respecto a Rhodesia del Sur. Sin embargo, como la fuerza no podía ser un objeto en sí misma y socavaría a las Naciones Unidas, solamente se le podía utilizar en última instancia.

869. Las sanciones hasta ahora habían sido ineficaces, pero sería imprudente llegar a la conclusión de que el instrumento era insuficiente. Era indispensable que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aplicasen las sanciones. África del Sur no cooperaría a menos que se le hiciese entender que al socavar las sanciones pasaría a sufrir las consecuencias eventualmente. Tal como estaban las cosas, África del Sur tenía un interés directo en esa forma de sabotaje.

870. El representante de Dinamarca recordó al Comité Especial que su país había votado a favor de la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General de 5 de noviembre de 1965, en la que se observaba que la creciente cooperación entre las autoridades de Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Portugal tenían por objeto perpetuar la dominación racista minoritaria en el sur de África y constituía una amenaza a la libertad, la paz y la seguridad en África.

871. Era importante mantener la confianza en las sanciones económicas, y el Comité Especial debía insistir en que las Naciones Unidas persuadiesen a todos los Estados Miembros a que interrumpiesen sus relaciones económicas con Rhodesia del Sur. Si alguno no estaba dispuesto a cooperar, las Naciones Unidas podrían tener que intervenir para que se aplicase esa política.

872. Finalmente, el Comité Especial tenía el deber de señalar y deseaba destacar que el objetivo debía ser la rápida independencia del pueblo de Zimbabwe.

873. El representante de Siria manifestó que las proporciones que había alcanzado últimamente la crisis de Rhodesia del Sur constituían una grave amenaza a la paz internacional. Los principios que defendían las Naciones Unidas eran violados por un régimen minoritario basado en la conquista, que tenía por finalidad la opresión y la explotación y que vivía de la discriminación.

874. La Potencia administradora había dado a una compañía privada la categoría de un leviatán conquistador. Había anexoado la mayor parte del Territorio a la Corona y distribuido las tierras más fértiles a la minoría extranjera; había aislado a los habitantes africanos del resto del mundo confinándolos a las zonas más áridas; los había utilizado como mano de obra barata forzada, les había negado el derecho a la propiedad mediante esa vergonzosa legislación que era la *Land Apportionment Act* y les había impedido adquirir una formación profesional por medidas como la llamada *Labour Conciliation Act*. Había continuado el proceso fomentando la inmigración de blancos, armando a los colonos, colocando bajo el control de los monopolios extranjeros los recursos del país y, finalmente, proclamando la autonomía de la colonia. En todo esto había un propósito general: usurpar definitivamente los derechos del pueblo de Zimbabwe a sus tierras, su libertad y su independencia.

875. Pero cuando los colonos habían visto que su benefactor estaba obligado a reconocer la evolución de las relaciones humanas gracias a la cual se había liberado la mayor parte de África, se habían rebelado y habían declarado su independencia. Pretendían ser libres de toda restricción que pudiera impedirles mantener perpetuamente al pueblo de Zimbabwe bajo su yugo y negarle sus derechos más elementales.

876. La Potencia administradora había adoptado una posición doble: por una parte había declarado que era la única responsable por su colonia de Rhodesia del Sur y, por la otra, se había abstenido de adoptar ninguna medida eficaz para poner fin a la rebelión. Esta flagrante contradicción entre sus palabras y sus actos había dado lugar a muchos comentarios y expresiones de pesar, particularmente entre los miembros del Comité Especial. Pero la contradicción era más aparente que real. La Potencia administradora reclamaba la responsabilidad única para impedir que otros actuasen y había dado así más protección y mayores seguridades al régimen que llamaba "rebelde" para apaciguar a la opinión mundial. En cuanto a las medidas adoptadas, de antemano sabía serían ineficaces. Ningún embargo podía ser eficaz mientras Sudáfrica pudiera seguir proporcionando su ayuda. La oposición del representante del Reino Unido a las sanciones contra Sudáfrica durante el último período de sesiones de la Asamblea General, había puesto en su verdadera perspectiva la política de la Potencia administradora.

877. Con respecto a la declaración hecha por el representante de Dinamarca en la sesión anterior, el representante de Siria dijo que el régimen de Verwoerd sabía muy bien que la menor sugestión acerca de la aplicación del Capítulo VII de la Carta contra Sudáfrica chocaría con la violenta oposición del Reino Unido. Sería inútil pensar que el Gobierno ilegal de Rhodesia del Sur cedería a la persuasión, puesto que estaba seguro de antemano de que no se haría nada. El citado representante no podía menos de desear que las ideas bien intencionadas del representante de Dinamarca pudieran ser puestas en práctica.

878. El representante de Siria podía hablar basándose en la amarga experiencia del pasado. La Potencia que administraba las tierras de Zimbabwe era la misma que tuvo el mandato sobre Palestina y que prometió a elementos extranjeros una pretendida patria en Palestina a expensas de la mayoría. Detrás de la tragedia de más de un millón de refugiados árabes expulsados de sus tierras y de sus hogares, se encontraban las mismas maniobras, las mismas intrigas, las mismas afirmaciones sobre la responsabilidad exclusiva y las mismas sutilezas jurídicas. Podía establecerse entre ambas un sorprendente paralelo. Era posible que los conquistadores estuviesen aprovechando el tiempo para atrincherarse y preparar otro hecho consumado; no vacilarían en llegar al genocidio para aterrar a las masas africanas y hacerlas huir de su patria. El sistema colonial había sido sometido a toda clase de pruebas y se había creído que valía la pena aplicarlo nuevamente. Las conclusiones a que habían llegado los peticionarios, que creían que no cabía esperar nada de las medidas que pudiese tomar la Potencia administradora, estaban plenamente justificadas, y si pedían una acción internacional era porque tenían sentido de la realidad. Esa misma Potencia que se decía indignada por la iniciativa ilegal de Smith, recibía actualmente a sus representantes a fin de emprender negociaciones con ellos, como si los derechos del pueblo de Zimbabwe pudieran ser objeto de un trato entre dos partes esencialmente extranjeras.

879. Las declaraciones eran incesantes: protestas violentas, contactos diplomáticos, sesiones dramáticas en el Consejo de Seguridad sobre el embargo del petróleo transportado por dos barcos, mientras Sudáfrica proporcionaba petróleo en abundancia; negociaciones, suspensión de las negociaciones para dar tiempo a pensar, optimismo después del pesimismo y viceversa; y durante todo este tiempo los inocentes sufrían, y se consolidaba otro baluarte del colonialismo.

880. La delegación de Siria apoyaba la posición adoptada por la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la lucha de los combatientes por la libertad, así como las propuestas presentadas por los representantes de Tanzania y Malí.

881. El representante de Yugoslavia observó que el rechazo del proyecto africano de resolución en la última sesión del Consejo de Seguridad suscitaba graves inquietudes. La responsabilidad del Reino Unido por la situación en Rhodesia del Sur era un hecho bien establecido, confirmado, por lo demás, por el propio Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

882. Desde la declaración unilateral de independencia se había pedido con insistencia al Gobierno del Reino Unido que ejerciese esa responsabilidad y adoptara las medidas necesarias, incluso el recurso a la fuerza, para poner definitivamente fin al régimen racista y conceder la independencia al pueblo de Zimbabwe conforme al sistema de gobierno de la mayoría. Pero en vez de adoptar las medidas necesarias, el Gobierno del Reino Unido había dado seguridades de que pondría fin al régimen en pocas semanas mediante sanciones económicas.

883. La delegación de Yugoslavia había declarado el 19 de abril de 1966 que quienes habían dado fe a dichas promesas habían comprendido que se les había engañado, que el imperio del derecho no había sido restablecido y que no había razón para creer que las actuales medidas pudieran restablecerlo. A pesar de

sus promesas de no reconocer al régimen de Smith, el Gobierno del Reino Unido había iniciado ahora negociaciones con él.

884. El representante de Yugoslavia subrayó que la situación en Rhodesia del Sur estaba estrechamente relacionada con la que existía en las otras colonias, y que los intereses de las Potencias coloniales y los de los regímenes racistas en África meridional estaban íntimamente vinculados. Su delegación estimaba que todo golpe real asestado al régimen de Smith hubiera tenido repercusiones negativas sobre los intereses económicos y de otra índole de las Potencias coloniales y de algunas otras Potencias, y que por esa razón no se habían adoptado las medidas necesarias en contra del régimen de Smith.

885. Era muy inquietante que el Consejo de Seguridad se hubiese abstenido de actuar. La forma en que el Gobierno del Reino Unido trataba con el régimen de Smith no ayudaba a establecer el gobierno de la mayoría sino que contribuía, por el contrario, a agravar una situación que constituía ya una grave amenaza a la paz.

886. El representante de Yugoslavia citó el informe del Secretario de Estado a cargo de las Relaciones Exteriores presentado a la Asamblea General el 20 de enero de 1966 y señaló que la tentativa de establecer un baluarte racista y colonialista en África central podría degenerar fácilmente en una crisis cuyos efectos se sentirían también más allá del continente africano, lo que confirmaba la necesidad de poner fin sin demora al colonialismo.

887. El citado representante subrayó que desde entonces había empeorado la situación en Rhodesia del Sur y que se había convertido en una verdadera amenaza a la paz. El Comité Especial debería recomendar medidas apropiadas al Consejo de Seguridad; se necesitaban medidas más amplias y más firmes, incluso el uso de la fuerza.

888. El representante subrayó que Yugoslavia no mantenía relaciones con Rhodesia del Sur. El Gobierno yugoslavo había condenado en los términos más categóricos la declaración unilateral de independencia. El Gobierno yugoslavo apoyaba sin reservas las pasadas luchas del pueblo de Zimbabwe y, en colaboración con los miembros africanos y otros miembros de las Naciones Unidas, continuaría apoyando todas las medidas que permitiesen al pueblo de Zimbabwe decidir libre e independientemente su porvenir.

889. La delegación de Yugoslavia se asociaría a toda resolución que pudiese llevar al derrocamiento del régimen de Smith y a la institución del gobierno de la mayoría.

890. El representante de Venezuela declaró que el caso de Rhodesia del Sur, así como el de África Sudoccidental y el de las colonias portuguesas, presentaban un carácter crónico que ponía a prueba la eficacia de la acción de la comunidad internacional. Esos casos constituían un reto a las Naciones Unidas y a la validez de los principios de la Carta. La declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur era la conclusión lógica de una crisis que se estaba incubando en la indiferencia, al parecer con el apoyo y la complicidad de la Potencia administradora.

891. Todas las veces que se había presentado el problema, dicha Potencia había adoptado una posición contradictoria: por una parte reivindicaba entera res-

ponsabilidad en todo lo referente a Rhodesia del Sur y, por la otra, declaraba que no podía actuar porque se lo impedía la convención que la ligaba al Gobierno de Rhodesia. Pero la declaración de independencia, contraria a las disposiciones de la convención invocada y a la Constitución de 1961, por su misma ilegalidad colocaba al Gobierno de Ian Smith en estado de rebelión contra la Corona británica y ponía unilateralmente fin a dicha convención. Por consiguiente, el Gobierno británico no tenía ya excusas para abstenerse de intervenir y adoptar las medidas que fuesen necesarias para restablecer al pueblo de Zimbabwe en sus derechos.

892. El representante de Venezuela estimaba que ya no se trataba de aplicar sanciones a Rhodesia del Sur. Las Naciones Unidas debían insistir en que el Reino Unido cumpliera sus obligaciones, puesto que, por propia confesión, era el único responsable, y en que actuase de conformidad con las disposiciones de la Carta en vez de negociar a escondidas con el Gobierno ilegal actual para volver a poner en vigor la Constitución de 1961; el Reino Unido debería poner fin a la rebelión, convocar una conferencia constitucional en la que deberían participar todos los interesados y en primer lugar el pueblo de Zimbabwe, elaborar una nueva Constitución y traspasar los poderes soberanos a quienes tenían derecho a reclamarlos, es decir, a cuatro millones de africanos, al pueblo de Rhodesia del Sur en su totalidad y no a una parte de ese pueblo. A este respecto, la delegación de Venezuela aprobaba totalmente las declaraciones de los peticionarios.

893. Venezuela no había reconocido y no reconocería al Gobierno de Smith. Como había indicado el representante de Venezuela en la nota dirigida al Secretario General, el Gobierno venezolano había prohibido todo comercio con Rhodesia del Sur, en particular las exportaciones de petróleo y productos petrolíferos destinados a ese país, hasta el día en que el pueblo de Zimbabwe fuese restablecido en sus derechos conforme a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

894. Los venezolanos, amantes de la libertad y de la paz, respetuosos de los derechos de los demás pueblos, anticolonialistas tanto por naturaleza como por su historia, no considerarían jamás que el problema estaba resuelto mientras fuesen desconocidos y violados los derechos de todo un pueblo y hasta que el pueblo de Zimbabwe no hubiese recobrado la libertad y la independencia al amparo de un sistema democrático de sufragio universal para todos los adultos.

895. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declara que el Comité Especial había iniciado el examen de una cuestión que preocupaba profundamente a toda la humanidad progresista, a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por sobre todo, naturalmente, a los pueblos africanos que luchaban heroicamente para librarse de los regímenes colonialistas y racistas que subsistían en el suelo africano. No era casualidad que el Comité Especial se estuviese ocupando del porvenir del pueblo de Zimbabwe; una cosa o la otra: o ese pueblo obtenía su libertad y su independencia, o se vería triunfar al grupo racista que se había apoderado del poder en Salisbury con ayuda de las Potencias coloniales e imperialistas, las cuales no vacilaban ante ninguna maniobra para mantener su dominio sobre Rhodesia del Sur, a la que quisieran convertir en una de las bases del colonialismo y el neocolonialismo. Apoyada por el régimen racista

de Salisbury, aliada al régimen fascista de Salazar, sostenida por el bloque militar y colonialista de la OTAN, Rhodesia del Sur se había convertido en el baluarte del racismo y del apartheid. Todos los regímenes mencionados tendían a un objetivo bien determinado: habían preparado en Africa una nueva estrategia colonialista, destinada no sólo a servir los intereses imperialistas en Africa central y oriental, sino también a reunir un conjunto de elementos militares en esa región. Los monopolios imperialistas cuyas capitales se llamaban Londres, Washington o Bruselas, para no citar más que éstas, procuraban ahogar los movimientos de liberación nacional en Sudáfrica y en Rhodesia como procuraban ahogar los movimientos de los combatientes de Angola, de Mozambique, de la Guinea llamada portuguesa. Querían obligar a los pueblos de esos países a renunciar a su derecho a la independencia a fin de que ninguno de los pueblos no independientes de Africa se encaminase por la vía del progreso liberándose de la sujeción económica a que estaba sometido. Las Potencias imperialistas y colonialistas no querían de ningún modo abandonar el Africa; conservaban siempre la esperanza de volverla a poner bajo su influencia política, y en ciertos casos económica, a fin de recolonizar a ciertos pueblos africanos. El juego de las fuerzas imperialistas se manifestaba claramente en el caso de Rhodesia del Sur. Los medios dirigentes del Reino Unido pretendían condenar las actividades del régimen actual, al que calificaban de rebelde, y afirmaban que querían ponerle fin. Pero ahí estaban los hechos: el Gobierno del Reino Unido y el de los Estados Unidos, que lo sostenían plenamente, hacían cuanto estaba en su poder para mantener en Rhodesia del Sur al régimen de Ian Smith.

896. Los miembros del Comité Especial tenían muy presente la evolución que había seguido la cuestión de Rhodesia, estudiada por ellos en varias oportunidades, como también por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Todos esos órganos habían adoptado muchas resoluciones útiles; pero el Reino Unido, los Estados Unidos, la República Federal de Alemania, Portugal, Sudáfrica y otros países colonialistas se habían negado a tener en cuenta la voluntad de los pueblos tal como estaba expresada en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Esas Potencias se habían negado a tener en consideración las muchas decisiones de las Naciones Unidas en que se condenaban las actividades de los racistas en Rhodesia del Sur y se preveía la concesión de una verdadera independencia al pueblo de Zimbabwe. En un principio, el Reino Unido había afirmado la supremacía de la ideología racista imponiendo al pueblo de Zimbabwe — es decir, a más de cuatro millones de habitantes de Rhodesia del Sur — la constitución racista de 1961, que privaba a ese pueblo de todos sus derechos políticos. Más adelante, después de la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, y a pesar de las reivindicaciones de los Estados africanos independientes, había permitido que las minorías racistas se apoderasen del instrumento que constituían la fuerza armada y el equipo militar. A las múltiples resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que exigían la abolición de la Constitución de 1961, el Gobierno del Reino Unido había contestado siempre con una negativa. Londres y Washington pretendían que las sanciones económicas impuestas al régimen de Ian Smith daban los resultados que se había esperado de ellas. Al mismo tiempo, el Reino Unido,

los Estados Unidos, la República Federal de Alemania y el Japón, comerciaban con Sudafrica. Los cifras publicadas en marzo de 1966 por el Board of Trade acerca de los intercambios entre el Reino Unido y Rhodesia del Sur demostraban que aún después del embargo decretado por el Reino Unido las importaciones de ese país provenientes de Rhodesia del Sur habían ascendido durante el mes de febrero de 1966 a 523.000 libras esterlinas, mientras que sus exportaciones destinadas a Rhodesia del Sur habían alcanzado la cifra de 672.000 libras esterlinas.

897. También era dudoso el papel de ciertos Estados miembros de la OTAN, y muy en primer lugar de los Estados Unidos, en cuanto se refería a las sanciones económicas contra el régimen de Ian Smith. Según la publicación *International Trade* del 28 de marzo de 1966, el Ministro de Comercio de los Estados Unidos había declarado "un embargo casi total sobre la mayoría de las exportaciones destinadas a Sudafrica". Pero esa decisión databa únicamente del 18 de marzo de este año y la prohibición, por lo demás, sólo se aplicaba a un número insuficiente de productos. Preveía, en especial, que se concederían licencias de exportación para equipo agrícola, para muchos productos básicos, material científico, productos textiles, etc. La autorización de exportar equipo y productos agrícolas afianzaba inevitablemente la posición de los grandes ganaderos y agricultores que explotaban atrozmente a los africanos y sostenían el régimen de Ian Smith. El agricultor desempeñaba una función extremadamente importante en la economía de Rhodesia, porque sus exportaciones contribuían a neutralizar el boicot de ese sector económico fundamental.

898. Los datos estadísticos sobre los meses de enero y febrero de 1966 demostraban que no había disminuido el ritmo del comercio de los Estados Unidos con Sudafrica y Rhodesia del Sur. Además, las exportaciones destinadas a Rhodesia del Sur incluían también mercaderías que figuraban en la lista del equipo estratégico, repuestos para material electrodinámico y materiales de construcción.

899. A partir del 11 de noviembre, fecha de la declaración unilateral de independencia de Ian Smith, las compras de tabaco hechas por los Estados Unidos en Rhodesia del Sur alcanzaron a un total de 175.000 libras esterlinas, lo que correspondía al promedio de compras anuales de los Estados Unidos en ese país.

900. En enero y febrero de 1966 las exportaciones de la República Federal de Alemania a Rhodesia del Sur ascendieron a 555.000 libras esterlinas, mientras que el valor de las mercaderías importadas por la República Federal de Alemania de Rhodesia del Sur en el mes de enero de 1966, únicamente, ascendieron a 1.170.000 libras esterlinas. En abril de 1966 el Sr. Strauss, ex Ministro de Defensa de la República Federal de Alemania, se había dirigido a Rhodesia del Sur y a Sudafrica para iniciar negociaciones comerciales con Ian Smith, los representantes de su régimen y ciertos medios comerciales del país. A juicio del periódico alemán *Die Welt*, "en el curso de ese viaje se expresó el deseo de desarrollar más las relaciones comerciales" entre el régimen de Ian Smith y la República Federal de Alemania.

901. Según el *Daily Express* del 20 de abril de 1966, se estaba formando con ese fin en la República Federal de Alemania una sociedad que agrupaba ya cinco grandes firmas industriales y sociedades de exporta-

ción. Siempre según el *Daily Express*, la dirección de esa sociedad había dicho que: "la sociedad, que goza del apoyo poderoso de algunos bancos suizos, concederá una ayuda tan amplia como sea posible a las empresas industriales alemanas a pesar de la situación actual".

902. El embargo sobre el petróleo y sus derivados había sido un fracaso. Era un instrumento designado a mantener en el poder al régimen racista de Ian Smith. Los súbditos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos no hablaban más que de las sanciones económicas que, según ellos, deberían bastar para poner fin al régimen de Ian Smith. En cuanto al Sr. Swart, Presidente de la República Sudafricana, el 21 de enero de 1966 había declarado en el Parlamento que su Gobierno seguiría manteniendo relaciones normales con el de Ian Smith y no aplicaría las sanciones adoptadas contra Rhodesia del Sur. En materia de boicot, los colonialistas de Lisboa hacían eco a los racistas de Pretoria. Cinco días después de la decisión del Consejo de Seguridad por la que se invitaba a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a interrumpir todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur, el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal había declarado que su Gobierno seguiría manteniendo las relaciones de siempre con el Gobierno de Ian Smith.

903. El Consejo de Seguridad había exigido que todos los Estados Miembros interrumpiesen sus exportaciones de petróleo y de productos petrolíferos a Rhodesia del Sur. Pero el petróleo seguía corriendo y era entregado por la República Sudafricana, vía Mozambique, con destino a Rhodesia del Sur. El volumen de esas entregas llegaba en la actualidad a 100.000 galones por día, a pesar de que el consumo diario de Rhodesia del Sur era de unos 83.000 galones. La opinión pública del mundo entero reconocía que las sanciones, tal como se aplicaban, no permitían hacer efectivo un verdadero embargo.

904. Lo mismo ocurría con las sanciones financieras adoptadas contra el Gobierno de Ian Smith. El 3 de marzo de 1966 decía el *Times* de Londres: "Por ahora no cabe temer que se hunda el régimen financiero de Rhodesia del Sur". También en este caso los racistas sudafricanos, con el concurso de los monopolios capitalistas del Occidente, acudían en ayuda de sus queridos amigos de Rhodesia. Según el *Economist*, a mediados de abril de 1966 los créditos comerciales puestos mensualmente a disposición de Rhodesia del Sur ascendían a 2.100.000 dólares.

905. Sería demasiado largo enumerar todos los casos en que no habían sido aplicadas las resoluciones tendientes a hacer desaparecer el vergonzoso régimen de Ian Smith. La responsabilidad recaía sobre la República Sudafricana y sobre Portugal. Los racistas de Lisboa y de Pretoria tenían protectores poderosos en Occidente y, en primer lugar, entre los miembros del bloque militarista y colonialista de la OTAN, es decir, el Reino Unido, los Estados Unidos, la República Federal de Alemania y algunas otras Potencias occidentales. Al exponer las razones de la política seguida por la República Sudafricana y Rhodesia del Sur en Mozambique y en Angola, un periodista del *The New York Times* había señalado que los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros Estados occidentales "estaban aumentando sus inversiones en esos cuatro países, y que los medios oficiales estimaban que la opinión pública occidental no podría reaccionar con bastante energía contra los falaces argumentos de los grupos financieros". Por

consiguiente, el fracaso de las sanciones económicas contra el régimen de Ian Smith podía atribuirse en gran parte al hecho de que el Reino Unido y los Estados Unidos habían invertido capitales en Rhodesia y de que su finalidad esencial era defender esas inversiones escudándose tras algunas sanciones económicas limitadas.

906. El Reino Unido y los Estados Unidos habían organizado bases financieras considerables en la República Sudafricana, en el África Sudoccidental, en Mozambique, en Angola y en Rhodesia del Sur, demostrando así que querían hacer caso omiso del apoyo que el régimen de Salazar daba al régimen racista de Rhodesia del Sur. La ineficacia de las medidas adoptadas contra el régimen de Ian Smith y sus socios Portugal, Sudáfrica y otras Potencias miembros de la OTAN, había permitido a los racistas de Rhodesia cometer nuevos crímenes contra el pueblo de Zimbabwe.

907. En Rhodesia del Sur, todos los que osaban elevar su voz contra las criminales actuaciones de Salisbury debían sufrir represalias y persecuciones constantes. Se había convertido a Rhodesia del Sur en un Estado policiaco, en una tierra de prisiones y de campos de concentración donde las poblaciones africanas vivían en el terror. De todo lo que acababa de decir, sólo se podía sacar una conclusión: que los que tenían la culpa de que hubiesen fracasado las negociaciones y de la situación actual eran principalmente el Reino Unido como Potencia administradora y sus cómplices, los Estados Unidos, la República Federal de Alemania, el régimen de Pretoria y el de Lisboa, así como los países que en una u otra forma impedían la aplicación de las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad. Londres y Washington habían demostrado sus verdaderas intenciones frente al régimen policiaco de Ian Smith cuando participaron en la votación sobre el proyecto de resolución presentado por Malí, Nigeria y Uganda el 23 de mayo de 1966 en el Consejo de Seguridad: al negarse a apoyar las propuestas de los Estados africanos miembros del Consejo de Seguridad tendientes a aplicar sanciones realmente eficaces, a luchar contra el sabotaje de la República Sudafricana y a adoptar medidas prácticas para hacer desaparecer el régimen racista de Sudáfrica, los Estados Unidos y el Reino Unido demostraron ser los cómplices del régimen racista de Salisbury.

908. En su defensa de los intereses imperialistas en África, Londres y Washington habían adoptado una posición insostenible sobre la cuestión de Rhodesia. En efecto, por una parte, Gran Bretaña y los Estados Unidos pretendían en sus declaraciones simpatizar con el pueblo de Zimbabwe, hablaban del derecho de los pueblos a la libre determinación y de su libertad a escoger el gobierno que les conviniera; pero en realidad tendían la mano a los racistas de Salisbury. Las negociaciones que el Gobierno británico había emprendido con el representante del régimen de Ian Smith en Londres habían sido seguidas con tanta atención como indignación. Era bien evidente que esas negociaciones entre Lisboa y Salisbury no eran más que una cortina de humo para disimular el complot que se preparaba contra el pueblo de Zimbabwe. Muy recientemente, el 10 de diciembre de 1965, el Primer Ministro británico, Sr. Harold Wilson, había declarado en el Parlamento británico que su Gobierno no negociaría jamás con el régimen ilegal de Salisbury. ¿Pero no estaban en curso negociaciones? El 25 de enero de 1966 el Primer Ministro británico volvió a decir que no se podría discutir el porvenir político de Rhodesia del Sur con un

régimen que pretendía gobernar ilegalmente al país, y hoy el mismo Primer Ministro se sentaba a la misma mesa que el representante de ese régimen. Después de declarar que se debía discutir la futura constitución de Rhodesia del Sur con los representantes responsables del pueblo de Zimbabwe en su totalidad, el Sr. Wilson negociaba con los representantes del régimen que había declarado ilegítimo, ilegal y rebelde, mientras se prohibía a los verdaderos representantes del pueblo de Zimbabwe participar en esas negociaciones.

909. El Gobierno británico negociaba con el Gobierno de Ian Smith procurando tratar con los racistas a espaldas de los pueblos africanos. Las Potencias colonialistas trataban así de mantener el dominio imperialista en África. La posición de la Unión Soviética había sido expuesta ya claramente y en repetidas oportunidades en diversos órganos de las Naciones Unidas. Esta posición no era más que la expresión de una política firme y coherente en defensa de los pueblos que luchaban para liberarse del yugo colonial. La Unión Soviética defendía, como siempre, el derecho sagrado de los pueblos a disponer de sí mismos y a escoger libremente las vías de su desarrollo.

910. El Gobierno de la Unión Soviética había defendido sin cesar la lucha del pueblo de Zimbabwe por la libertad y la independencia verdaderas. Estaba dispuesto a apoyar toda acción que decidiesen los pueblos africanos para garantizar los derechos de ese pueblo.

911. El Comité Especial no podía permanecer indiferente ante la situación existente en Rhodesia del Sur, porque constituía una amenaza a la paz y a la seguridad, no sólo de África sino del resto del mundo. Manteniendo en el poder en Rhodesia del Sur a los racistas blancos lo que se hacía era ayudar a las fuerzas imperialistas y racistas que habían concebido el proyecto criminal de crear una especie de "cordón sanitario" destinado a aislar a los pueblos de África meridional dominados aún por los colonialistas y los racistas blancos, con la esperanza de preservarlos de la influencia de los pueblos africanos libres e impedir así que se liberasen a sí mismos.

912. La Unión Soviética, único miembro permanente del Consejo de Seguridad que votó en favor del proyecto de resolución presentado por Malí, Nigeria y Uganda, apoyaba las justas reivindicaciones de los países africanos. Consideraba indispensable adoptar medidas urgentes para resolver lo antes posible el problema de Rhodesia del Sur, en interés del pueblo de Zimbabwe y de todos los pueblos africanos. La reivindicación de los pueblos africanos era extremadamente concreta. Se trataba de arrancar el poder a los racistas, de abrogar la Constitución racista de 1961, de fijar un plazo límite para la concesión de la independencia al pueblo de Zimbabwe, de organizar elecciones basadas en el principio del sufragio universal sobre la base de "un voto por persona", de transferir inmediatamente el poder en Rhodesia del Sur a un gobierno que representase las aspiraciones de la mayoría africana en cuanto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

913. El Comité Especial debía condenar a los colonialistas portugueses y a los racistas sudafricanos, así como condenar a todos los que daban ayuda al régimen de Ian Smith en Rhodesia del Sur y se negaban abiertamente o en secreto a aplicar las decisiones de las Naciones Unidas. El Comité Especial tenía el deber de

lanzar un nuevo llamamiento a todos los Estados Miembros para invitarlos a aplicar inmediatamente y sin reservas las decisiones generales relativas a los problemas de Rhodesia del Sur adoptadas ya por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

914. El Gobierno de la Unión Soviética había defendido siempre y seguía defendiendo la adopción de medidas tan eficaces y completas como fuese posible contra los racistas de Rhodesia. Más especialmente reclamaba que se aplicasen las sanciones previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas por ser las únicas que permitirían defender los intereses del pueblo de Zimbabwe y de todos los pueblos africanos.

915. La delegación de la Unión Soviética apoyaría todo proyecto de resolución que tuviese en cuenta las consideraciones precedentes. Esperaba que esas condiciones y las propuestas presentadas por los representantes de Mali, Tanzania, la India y otras delegaciones, serían estudiadas atentamente y hallarían su expresión en las decisiones que correspondía adoptar al Comité Especial.

916. El representante de Sierra Leona dijo que desde que el Comité había examinado la cuestión de Rhodesia del Sur un año antes, Smith había hecho su declaración unilateral de independencia sin que el Gobierno del Reino Unido adoptara ninguna medida seria para poner fin a esa rebelión.

917. Los peticionarios se habían referido al aumento de la opresión y al hecho de que se hallaban en prisión más de 34.000 personas del pueblo de Zimbabwe por haber osado hablar en defensa de sus derechos políticos inalienables. El Reino Unido había dicho que no podía hacerlos poner en libertad porque se trataba de un asunto interno. La delegación de Sierra Leona jamás había estado de acuerdo con esa posición. Como el Reino Unido había afirmado en repetidas oportunidades que el Gobierno de Smith era ilegal y que el único representante legal era su Gobernador en Salisbury, ya no existía la ficción detrás de la cual se escudaba.

918. El Reino Unido dijo en su declaración de Lagos que el régimen de Smith sería derrocado por las sanciones en unas pocas semanas. Pero habían transcurrido casi siete meses y el régimen continuaba existiendo. Recibía todo el petróleo que necesitaba y podría recurrir a la electricidad y al carbón si se viera obligado a hacerlo. Era bien sabido que diariamente llegaban abastecimientos de petróleo que pasaban por Sudáfrica y Mozambique. Se habían intensificado los intercambios comerciales con Japón, la República Federal de Alemania y Francia, lo que demostraba claramente la ineficacia de las sanciones.

919. En abril de 1966, después de que el Reino Unido tratara de poner obstáculos al Comité Especial y pidiera que se reuniese el Consejo de Seguridad, el cual aprobó su proyecto de resolución, cuatro cosas habían quedado perfectamente establecidas: en primer lugar, las pretendidas sanciones no daban resultado. En segundo lugar, todos reconocían tácitamente que por sí mismas las resoluciones no tendrían efecto. Era necesario recurrir a la fuerza. En tercer lugar, la situación resultante constituía una amenaza a la paz; y, en cuarto lugar, el Consejo de Seguridad había apelado en su resolución al Reino Unido para que impidiera que llegaran a Beira navíos que se podía razonablemente suponer transportaban petróleo destinado a Rhodesia del Sur y le había autorizado a detener y poner bajo

arresto al petrolero *Joanna V* a su partida de Beira en caso de que su cargamento de petróleo hubiese sido descargado en ese puerto.

920. En esa resolución, el Consejo de Seguridad había autorizado el empleo de la fuerza en virtud del Capítulo VII de la Carta en el caso de un solo navío de nacionalidad indeterminada. Al rechazar la enmienda africana y el proyecto de resolución presentado por Mali, Nigeria y Uganda tendiente a extender el uso de la fuerza a la cuestión más importante del derrocamiento rápido del régimen de Smith, el Consejo había demostrado que no estaba dispuesto a actuar de conformidad a los deseos de la mayoría de los Estados.

921. En virtud del Capítulo VII de la Carta, la fuerza podía y debía ser empleada sin demora. Las vacilaciones y las dudas afianzaban el régimen de Smith, que ya estaba tratando de estrangular a Zambia. Se habían interrumpido las entregas de carbón y las comunicaciones, tal vez el próximo paso fuese privar a Zambia de la energía eléctrica que recibía de la presa de Kariba.

922. El Comité Especial no debía permanecer inactivo y negarse a emplear la fuerza cuando un país entero era víctima del chantaje. Debía hacer saber al Reino Unido que su no intervención en Rhodesia del Sur era una traición a la confianza del pueblo africano de Zimbabwe. Era una vergüenza que el Reino Unido hubiese utilizado a los africanos de Rhodesia del Sur y a sus hermanos de África oriental y occidental para luchar en su favor en dos guerras mundiales y se negase ahora a combatir a su vez para liberar al África. Millones de africanos habían muerto en Birmania y cientos habían pilotado aviones sobre Europa para ayudar al Reino Unido y a sus aliados a mantener su sistema de vida. Y, sin embargo, el Reino Unido y sus aliados eran precisamente los que hoy hacían cuanto estaba en su poder para impedir toda acción seria. El Reino Unido no podía negar que había recurrido al empleo de la fuerza en otras regiones para mantener la constitucionalidad; así lo estaba haciendo en este momento en Adén.

923. De esa indiferencia a la opinión africana podían sacarse dos conclusiones: la primera era que el Reino Unido y sus aliados estaban satisfechos con el *statu quo*, pues sus intereses económicos estarían mejor servidos si continuaban empleando africanos para cortar madera y sacar agua.

924. La segunda conclusión era la de que si hubiera habido 200.000 negros entre cuatro millones de blancos y los negros hubieran tratado de usurpar el poder, ya se hubieran tomado hace mucho medidas enérgicas. Sin embargo, cuando la pequeña minoría blanca tiranizaba a los africanos en su propio territorio, no se adoptaba ninguna medida eficaz.

925. Cuando los Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido consideraron que estaban en peligro en el Congo las vidas de un número relativamente pequeño de sus nacionales, organizaron rápidamente una operación de enlace por avión para llevar a cabo lo que calificaron de misión humanitaria. En este momento no les preocupaban en lo más mínimo los sentimientos del pueblo africano sujeto a la opresión en Rhodesia del Sur.

926. La finalidad del pueblo africano era establecer un gobierno de la mayoría en Zimbabwe, y para ello sería necesario que el Reino Unido recurriera al uso de la fuerza para derrocar al régimen de Smith y que el

Consejo de Seguridad aprobara ese procedimiento. La injusta Constitución de 1961 debería ser derogada y los dirigentes deberían ser puestos inmediatamente en libertad. Sería necesario reunir entonces una conferencia constitucional para determinar los deseos de la población. Se había recurrido a la fuerza en un asunto de escasa importancia que se refería a un solo navío. Debería ahora usársela inmediatamente para asegurar el gobierno de la mayoría en el Territorio y permitir que el pueblo de Zimbabwe emprendiera rápidamente el camino de la libertad y la independencia. La delegación de Sierra Leona apoyaría toda resolución que expresase estas ideas y condenara al Reino Unido por su inacción y a Portugal y al África del Sur por su asistencia.

927. El representante de Polonia apoyó la declaración hecha por el Presidente en una sesión anterior (A/AC.109/SR.418) sobre la no adopción por el Consejo de Seguridad de la resolución presentada por Malí, Nigeria y Uganda y apoyada por Bulgaria, Jordania y la URSS.

928. La culpa de esa abstención debía atribuirse decididamente al Reino Unido, los Estados Unidos y sus aliados. Al negarse a apoyar esa resolución demostraron estar dispuestos a ayudar a los colonos blancos racistas llegado el momento de escoger entre ese régimen y las aspiraciones legítimas del pueblo de Zimbabwe.

929. La actitud de esas Potencias daba nuevos alientos al régimen de Smith. Como Potencia administradora de Rhodesia del Sur, el Reino Unido se había hecho continuamente cómplice de la minoría racial de ese Territorio antes y después de la usurpación del poder por Ian Smith; era indiscutible que al declarar por adelantado que no recurriría al uso de la fuerza alentó a los colonos blancos a proceder, y que la continuación de esa política después de la Declaración unilateral de independencia no era más que una cortina de humo para permitir que el régimen ilegal tuviese tiempo de consolidar su posición. El Primer Ministro del Reino Unido había asegurado que el efecto acumulativo de las sanciones económicas y financieras derribaría al régimen de Smith en el espacio de pocas semanas y no de pocos meses; pero ahora podía verse claramente que esas sanciones habían fracasado, ya que el régimen se mantenía en el poder desde hacía casi siete meses a pesar de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y de la opinión mundial. La rebelión continuaba porque sacaba su fuerza del apoyo exterior.

930. Cada vez era más evidente que la cuestión de Rhodesia del Sur no podía ser examinada aisladamente y que guardaba relación directa con la opresión racial que existía en la República Sudafricana. Así lo habían demostrado ampliamente los peticionarios que se presentaron al Comité Especial; sus declaraciones pusieron en claro las verdaderas intenciones del Reino Unido, de los Estados Unidos, de la República Federal de Alemania y de otros miembros de la OTAN. Lejos de prestar una ayuda eficaz para abolir el régimen de la minoría racista, estaban en realidad contribuyendo a mantenerlo en el poder debido a los muchos lazos económicos y financieros que les unían a Rhodesia del Sur y a sus vecinos, Sudáfrica y el Mozambique portugués.

931. El documento de trabajo preparado por la Secretaría demostraba sin lugar a dudas que Sudáfrica y Portugal desafiaban abiertamente la resolución del Consejo de Seguridad y continuaban prestando ayuda

financiera y de otra índole a Rhodesia del Sur, y que las sociedades de la República Federal de Alemania, del Japón, del Reino Unido y de los Estados Unidos continuaban un floreciente intercambio comercial con Rhodesia del Sur. También había fracasado el embargo del petróleo, porque Sudáfrica y Portugal habían podido continuar enviando abastecimientos. Portugal seguía manteniendo relaciones normales con Rhodesia del Sur y hasta había puesto en duda la legalidad de una decisión reciente del Consejo de Seguridad, a pesar de que el alcance de esta decisión había sido limitado deliberadamente.

932. El Reino Unido, los Estados Unidos y sus aliados habían revelado claramente una vez más sus verdaderas intenciones cuando en abril y mayo de 1966 se abstuvieron en la votación sobre las propuestas de los miembros africanos del Consejo de Seguridad tendientes a dar carácter general y obligatorio a esas sanciones económicas.

933. El Gobierno de Polonia comprendía la preocupación y la amargura de los países africanos ante esta tentativa deliberada de crear otro Estado racista más en África, y estaba convencido de que el Reino Unido tenía medios para librarse del régimen de Smith. Era necesario adoptar medidas eficaces, incluso el uso de la fuerza, para derrocar ese régimen. La delegación polaca creía que debía apelar al Consejo de Seguridad a fin de que adoptase sanciones obligatorias, dentro del ámbito del Capítulo VII de la Carta, para asegurar la aplicación de su propia resolución 217 (1965); y si el Consejo de Seguridad invitara una vez más a la Potencia administradora a utilizar todos los medios, incluso la fuerza, abriría el camino para la concesión de una verdadera independencia.

934. Polonia se había declarado siempre partidaria de la aplicación, por medios pacíficos, de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV). Si bien era partidaria del principio de la negociación, tenía graves dudas ante la idea de las conversaciones secretas que se estaban celebrando entre el Reino Unido y el régimen rebelde en Salisbury, puesto que implicaban un reconocimiento de hecho del régimen y le alentaban aún más. En vez de negociar con el pueblo de Zimbabwe, el Reino Unido trataba de llegar a un acuerdo a sus espaldas. Se habían presentado diversas propuestas que la delegación polonesa aprobaba, en particular las de las delegaciones de Malí y Tanzania. La declaración del representante de Dinamarca, aunque bien intencionada y sincera, había sido redactada en tal forma que no mencionaba la violación de las sanciones por Portugal. El representante de Polonia confiaba en que esa omisión no fuese intencional ni guardase relación con el hecho de que Portugal era miembro de la OTAN. La adopción por el Comité Especial del método de acción propuesto por el representante de Dinamarca significaría un paso hacia atrás, porque mientras la resolución 217 (1965) del 20 de noviembre de 1965 del Consejo de Seguridad apelaba a todos los Estados para que aplicasen las sanciones, el representante de Dinamarca sugería que procediesen así todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, lo que excluía a la República Federal de Alemania que no era miembro de las Naciones Unidas y continuaba apoyando los regímenes racistas de Smith y Verwoerd.

935. El representante de Dinamarca había insistido en la necesidad de ser razonable y tener paciencia para

resolver el problema de Rhodesia del Sur, y había tratado de persuadir al Comité Especial de que no recomendase el uso de la fuerza. La delegación de Polonia sería la primera en aprobar esa política si existiera un verdadero deseo de conceder la igualdad de derechos, la libertad y la independencia al pueblo de Zimbabue; pero el Reino Unido hacía caso omiso de sus derechos y apoyaba un régimen racista. El Comité Especial no podría disculpar esa política. Aunque el Comité Especial se hubiese ocupado de la cuestión durante seis años, el Reino Unido había hecho siempre caso omiso de sus opiniones, así como de las de la gran mayoría de los Estados Miembros, incluso la propia Dinamarca.

936. El Gobierno de Polonia había aplicado íntegramente todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, había apoyado constantemente el derecho del pueblo de Zimbabue a la independencia y había aconsejado en repetidas oportunidades al Reino Unido que derogase la Constitución de 1961. El Comité debería fijar una fecha límite para el traspaso de los poderes y debería rogarse al Reino Unido que realizara elecciones generales en el Territorio y estableciese un gobierno elegido democráticamente que aboliera las leyes discriminatorias, pusiera fin al estado de emergencia y liberase a los presos políticos.

937. Pero el objetivo inmediato del Comité Especial debía ser poner fin a la rebelión. El Comité debería apelar al Consejo de Seguridad para que adoptase las medidas necesarias a fin de que se aplicara su propia decisión del 20 de noviembre de 1965. La delegación de Polonia apoyaría toda propuesta en ese sentido.

938. El representante de Chile expresó su agradecimiento al Gobierno de Tanzania por la cordial hospitalidad con que una vez más había acogido al Comité Especial, gracias a la cual este último había podido ponerse nuevamente en contacto con los diferentes movimientos de liberación que luchaban por la independencia de sus países respectivos y cuya sede se encontraba en Dar es Salaam.

939. Con referencia a la cuestión de Rhodesia del Sur, el representante de Chile dijo que era lamentable que la Potencia administradora no hubiese tratado de impedir por todos los medios a su alcance la declaración unilateral de independencia. Ahora que el Sr. Smith había desafiado al mundo libre proclamando una falsa independencia, las Naciones Unidas debían hacer lo necesario para poner fin a ese régimen minoritario que se negaba a hacer justicia a las justas reivindicaciones del pueblo de Zimbabue. Las sanciones económicas fracasaron por la falta de cooperación de algunos países y porque Sudáfrica y Portugal habían hecho caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El Gobierno de Chile, por su parte, había aplicado a la letra la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General, así como las resoluciones 216 (1965) y 217 (1965) del Consejo de Seguridad. Era indudable que si todos los países hubiesen procedido en esa forma, el régimen minoritario de Smith ya hubiera sido derrocado.

940. La delegación chilena apoyaría firmemente todas las medidas que se adoptasen, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, para derrocar el régimen de Ian Smith y permitir que el pueblo de Rhodesia del Sur obtuviese su independencia y formase su propio gobierno.

941. El representante de Bulgaria manifestó que la actitud de la delegación búlgara en lo que se refería al problema de Rhodesia del Sur era bien conocida y había sido reafirmada recientemente durante el último período de sesiones del Consejo de Seguridad. El Gobierno y el pueblo de Bulgaria apoyaban plenamente la lucha encarnizada que estaba realizando el pueblo de Zimbabue para librarse de la doble dominación colonial, la del Reino Unido y la de la minoría blanca racista a que estaba sometido.

942. Los últimos debates del Consejo de Seguridad y el rechazo del proyecto de resolución presentado por los africanos miembros del Consejo, habían puesto una vez más en evidencia la política del Reino Unido, que toleraba los actos criminales cometidos por la minoría racista blanca con el fin de privar al pueblo de Zimbabue de sus derechos políticos fundamentales y mantenerlo en la esclavitud. Los diferentes Gobiernos británicos que se habían sucedido en el poder habían preparado sistemáticamente el camino a Ian Smith, quien pudo así sin dificultad proclamar unilateralmente la independencia.

943. Las negociaciones secretas que se realizaban en la actualidad en Londres entre Ian Smith y el Gobierno británico y que debían, al parecer, continuar en Salisbury, habían provocado a justo título la indignación de los países africanos, porque equivalían a un reconocimiento de facto del régimen ilegal de Rhodesia del Sur. El Reino Unido se negaba más que nunca a utilizar la fuerza contra ese régimen racista, afirmando insistentemente al mismo tiempo que él era el único responsable por Rhodesia del Sur. Esta ingeniosa política le permitía mantener el régimen minoritario racista y dificultar a la vez la aplicación de todas las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para derrocar ese régimen. Los Estados Unidos y las Potencias occidentales, en particular la República Federal de Alemania, habían intensificado su cooperación con el régimen de Ian Smith, fuese directamente, fuese por intermedio de Sudáfrica. Ese régimen se inspiraba en conceptos nazis y prácticas hitleristas para mantener en la opresión al pueblo de Zimbabue. En efecto, en Rhodesia del Sur existían campos en los que se torturaba a los prisioneros y donde se volvía a encontrar la histeria anticomunista del fascismo. Felizmente para los pueblos africanos y para todos los pueblos del mundo, existía otro Estado alemán que se preocupaba sinceramente por la liberación de los pueblos coloniales. Como se recordará, el 20 de abril de 1966 el Presidente del Comité Especial recibió un telegrama del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana en la que este último declaraba inequívocamente que su Gobierno se había negado a reconocer el régimen racista de Ian Smith y que no mantendría ninguna relación con él.

944. El representante de Bulgaria compartía la opinión de los representantes africanos que hicieron observar que los Estados Unidos, el Reino Unido y las demás Potencias occidentales estaban siempre dispuestos a recurrir a la fuerza contra los combatientes africanos por la libertad, pero jamás contra los criminales fascistas y los racistas blancos. El representante de la Costa de Marfil había recordado a justo título la acción armada que Bélgica, con la cooperación del Reino Unido y los Estados Unidos, llevó a cabo en Stanleyville contra los combatientes congoleños con el pretexto de proteger algunos súbditos blancos. Era la-

mentable que los sentimientos humanitarios occidentales no llegasen hasta proteger también la vida de los seres humanos cuya piel no era blanca.

945. En su resolución del 21 de abril de 1966 (A/AC.109/158), el Comité Especial había exhortado a la Potencia administradora a utilizar la fuerza contra la minoría racista de Rhodesia del Sur, y recomendado al Consejo de Seguridad que estudiara con urgencia la adopción de las demás medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de poner en práctica lo antes posible las resoluciones adoptadas. Había llegado el momento de que el Reino Unido y sus aliados dejaran de sabotear la acción del Consejo de Seguridad. El Comité Especial, por su parte, estaba obligado a adoptar, ahora que se hallaba en tierra africana, una resolución que incluyese medidas eficaces para poner definitivamente fin al régimen fascista de Ian Smith y restablecer los derechos sagrados del pueblo de Zimbabwe a la libertad y la independencia.

946. El representante de los Estados Unidos de América recordó que la opinión de su país sobre la cuestión de la libre determinación de los pueblos de África había sido expuesta recientemente por el Presidente Johnson en un discurso pronunciado en ocasión del tercer aniversario de la Organización de la Unidad Africana (OUA). El Presidente Johnson había dicho que el derecho a tener un gobierno autónomo, basado en instituciones democráticas, representaba una de las aspiraciones fundamentales comunes a los pueblos de África y al pueblo de los Estados Unidos. Prometió que su Gobierno no concedería su apoyo a los gobiernos minoritarios basados en la idea de que los hombres son desiguales ante la ley.

947. El Gobierno de los Estados Unidos, por consiguiente, compartía enteramente las ideas de los pueblos de Rhodesia del Sur; pero estimaba que los países del mundo debían agotar todas las posibilidades de lograr los objetivos perseguidos por medios pacíficos antes de correr el peligro de derramar sangre en África. Por esa razón apoyaba los esfuerzos emprendidos actualmente por el Reino Unido y las Naciones Unidas. Estas últimas estaban realmente obligadas por la Carta a tratar de llegar a una solicitud pacífica antes de recurrir a otros medios. Era cierto que las Naciones Unidas no habían alcanzado aún el fin perseguido; pero antes de llegar a la conclusión de que su acción había sido ineficaz, el Comité Especial debía hacer un examen de los hechos.

948. En noviembre de 1965 el Consejo de Seguridad había aprobado por unanimidad su resolución 217 (1965), en la que incluía un programa de medidas estrictas destinadas a aislar a Smith política y económicamente y a poner fin a su régimen. Desde entonces, sesenta y seis Estados habían presentado espontáneamente información sobre las medidas que habían adoptado para llevar a la práctica ese programa.

949. Las Naciones Unidas habían invitado en particular a los Estados Miembros a no reconocer el régimen de Smith, y ni un solo Estado lo había reconocido. Era lamentable que algunos países hubiesen declarado públicamente su intención de no conformarse a las medidas económicas recomendadas en la resolución 217, a pesar de que estas medidas habían sido apoyadas por la mayoría. Sin embargo, podían distinguirse tipos muy distintos de respuestas. Algunos Esta-

dos, en particular los Estados socialistas cuyo comercio exterior estaba centralizado, no mantenían relaciones comerciales de mayor importancia con Rhodesia del Sur. Para esos países la aplicación de la resolución era en buena parte cuestión de forma. Pero los países vecinos de Rhodesia del Sur, como Zambia y Malawi, habían sufrido mucho; otros, incluso los Estados Unidos, habían sufrido los efectos menos directamente pero con bastante severidad. Los Estados Unidos tenían anteriormente lazos económicos muy diversos con Rhodesia del Sur, y habían debido por consiguiente adoptar medidas muy diversas. Se habían suspendido las solicitudes de préstamos y de garantías gubernamentales para el comercio con Rhodesia; se habían adoptado medidas eficaces para desalentar las principales importaciones; se habían suspendido los contingentes de azúcar previstos para 1965-1966 y se habían bloqueado los embarques de azúcar que ya estaban en curso. Se había decretado el embargo, naturalmente, de las exportaciones de material militar y de productos petrolíferos destinados a Rhodesia del Sur. Los únicos artículos que aún se exportaban servían casi totalmente para propósitos humanitarios y carecían de importancia para la economía de Rhodesia del Sur.

950. Los Estados Unidos también habían participado en los embarques aéreos de productos petrolíferos para Zambia, y contribuyeron a mantener la gran ruta del norte.

951. Las medidas adoptadas por diversos Estados Miembros en cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas eran impresionantes si se les consideraba en conjunto y, sin embargo, el proceso no había sido completado aún. Seguían llegando nuevas respuestas. Estaba fuera de lugar que los países que no mantenían prácticamente relaciones comerciales con Rhodesia del Sur quitaban importancia a los considerables sacrificios que habían hecho los que sí las mantenían, e insistían en el supuesto embargo total que ellos habrían decretado. Era evidente, pues, que las acusaciones lanzadas contra los Estados Unidos en esa sesión carecían totalmente de fundamento.

952. En el documento de trabajo de 10 de mayo preparado por la Secretaría (véanse los párrs. 593 a 738, *supra*), se decía que en marzo y abril de 1966 las exportaciones de Rhodesia del Sur habían disminuido en un 60% debido a las sanciones internacionales, y que todos los socios comerciales habituales de Rhodesia del Sur, o casi todos, habían prohibido las importaciones provenientes de dicho país.

953. El Gobierno de los Estados Unidos había tratado activamente de hacer más completa su participación en el programa de sanciones. Los países culpables de las importantes lagunas en ese programa no debían olvidar que al negar su cooperación se colocaban entre los adversarios de la mayoría.

954. El grado de unanimidad alcanzado en esta cuestión era debido en gran parte a que entraban en juego principios morales elementales ante los cuales nadie podía permanecer indiferente. Como Miembro de las Naciones Unidas, el Gobierno de los Estados Unidos consideraba firmemente que había aceptado la obligación de defender derechos humanos fundamentales, algunos de los cuales estaban en juego en Rhodesia del Sur. Se habían hecho notables progresos en África, y el Gobierno de los Estados Unidos garantizaba que esos progresos no serían negados al pueblo

de Rhodesia del Sur. Continuaría colaborando con las Naciones Unidas para establecer en Rhodesia un gobierno mayoritario y asegurar a todo el pueblo de dicho país el derecho a la libre determinación.

955. El representante de Australia recordó que, en 1965, antes de la declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur, el Primer Ministro de Australia había declarado en el Parlamento que su Gobierno se había puesto directamente en contacto con el de Rhodesia del Sur para tratar de mostrarle cuál sería el resultado inevitable de su política. El Primer Ministro expresó su convencimiento de que era necesario:

"...apresurarse a emprender el camino del sufragio de los adultos porque, de lo contrario, se asistiría a un recrudecimiento de la situación interna y de la hostilidad entre vecinos y habría que aceptar finalmente los resultados en una atmósfera de animosidad racial desfavorable al mantenimiento de la presencia europea y contraria a las buenas relaciones interraciales de que se había hecho campeón el nuevo *Commonwealth*."

Australia había sido uno de los primeros Gobiernos que reaccionaron inmediatamente después de la declaración unilateral de independencia y mucho antes de las decisiones del Consejo de Seguridad: se negó a reconocer el régimen de Smith, retiró sus representantes diplomáticos, declaró inmediatamente el embargo de sus intercambios comerciales con Rhodesia del Sur y adoptó las medidas necesarias en el plano de las finanzas internacionales.

956. El representante de Dinamarca había ido al nudo del problema al decir, en la sesión anterior, que no había pruebas inequívocas de que las sanciones hubieran fracasado. No se disponía de bastantes hechos en apoyo de esa afirmación. Si bien era cierto que las medidas no habían tenido efectos tan rápidos como se había esperado, no era menos evidente que habían causado serias dificultades, y las conversaciones que estaban en curso así lo demostraban.

957. El representante de Australia tampoco creía justo no reconocer todo el alcance de las medidas adoptadas por el Reino Unido. Su acción naval, sin precedente en la historia de las Naciones Unidas, había impedido ciertamente que una gran cantidad de petróleo fuese importada a Rhodesia y, lo que era aún más importante, había hecho, probablemente, que se tambaleara la confianza del régimen ilegal.

958. El Gobierno australiano consideraba alarmante y temible el uso de la fuerza; tal decisión no sólo plantearía graves dificultades de aplicación sino que entrañaría además incontables sufrimientos para las poblaciones africanas. El Gobierno de Australia aconsejaba la paciencia, pero no la pasividad, para permitir que el aislamiento produjese sus efectos. Si la espera era el precio que se había de pagar para evitar mayores sufrimientos y tal vez grandes derramamientos de sangre, era un precio muy modesto.

959. El representante de Italia declaró que su Gobierno reconocía el derecho de los pueblos de Rhodesia del Sur a la libre determinación, la independencia y el gobierno de la mayoría conforme al régimen universal de los adultos, y que el pueblo de Rhodesia contaba con toda la simpatía de Italia en su lucha. La Constitución de 1961 no era satisfactoria, porque no preveía, en particular, la posibilidad de una evolución hacia un gobierno de la mayoría. Italia había condenado

la declaración unilateral de independencia y se había conformado a las disposiciones de las diferentes resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Había criticado también la pasividad del Gobierno del Reino Unido. Al afirmar que el Reino Unido era responsable por Rhodesia del Sur aun en una época en que esa opinión no era compartida por todos los Miembros de las Naciones Unidas, Italia había tratado de alentar a ese país a adoptar medidas más audaces y más oportunas, y lamentaba que no lo hubiese hecho.

960. Sin embargo, los peticionarios habían dicho al Comité Especial que el régimen de Smith disponía de 40.000 hombres armados. Esa fuerza era una realidad que se había de tener en cuenta antes de poder adoptar nuevas medidas para resolver el problema. El Gobierno italiano había aceptado la solución de las sanciones, a pesar de que implicaba considerables sacrificios industriales, comerciales e individuales. El representante de Italia los mencionaba, no para subrayar el papel desempeñado por Italia en el programa de sanciones, sino para demostrar cuánto sentía su país las acusaciones de que ese programa había sido un fracaso y una farsa. El documento de trabajo preparado por la Secretaría daba la lista de los Estados que se conformaron a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad: ¿era necesario llegar a la conclusión de que todos esos Estados habían sido víctimas de una farsa o cómplices en ella? ¿No se había de ver más bien en ese programa un ejemplo interesante de cooperación internacional, una tentativa loable para dar solución pacífica a un grave problema?

961. La resolución del Consejo de Seguridad no había sido plenamente aplicada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por esa razón, como por el alcance limitado de las sanciones, no se habían alcanzado los resultados esperados. ¿El Comité Especial debía llegar por ello a la conclusión de que el sistema había fracasado y de que había que adoptar otras medidas? Como observó la delegación italiana en el curso del debate precedente, para las Naciones Unidas el problema de Rhodesia del Sur era una ocasión de demostrar lo que se podía hacer; el representante de Dinamarca había expresado su inquietud ante el porvenir de las Naciones Unidas si no se lograba hallar una solución generalmente aceptable para resolver ese problema. Había hecho también sugerencias interesantes en cuanto a la manera de asegurar, lo mejor posible, la aplicación eficaz de las sanciones, y el Comité Especial debería dar atenta consideración a esas sugerencias.

962. El representante de la República Unida de Tanzania señaló que estimaba necesario adoptar nuevas medidas porque las sanciones sólo servirían para dañar la economía de Zambia sin derrocar por ello el régimen de Smith. Los países que decían que aplicaban sanciones eran precisamente los que, en realidad, hallaban medios ingeniosos para evitarlas. Un país como los Estados Unidos no debía conformarse con apoyar al Reino Unido: le correspondía una función más importante. Toda el Africa, incluso Zambia, estaba muy desconforme con las medidas adoptadas por el Reino Unido. Era irónico, por consiguiente, que los Estados Unidos se limitasen a apoyar al Reino Unido al tiempo que pretendían ayudar a los africanos. La delegación de Tanzania esperaba que los Estados Unidos se asociasen más estrechamente a los esfuerzos tendientes a derrocar el régimen de Smith.

963. El representante de Checoslovaquia, tomando la palabra por invitación del Presidente y con su autorización, agradeció al Comité Especial el recibimiento que se le había hecho y la autorización que se le había concedido para participar en la sesión del Comité en calidad de observador. Expresó también su gratitud al Gobierno de la República Unida de Tanzania por la hospitalidad que se le ofrecía como participante.

964. El hecho de que Checoslovaquia consideraba muy importante el trabajo del Comité Especial se podía comprobar por la carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, que el Comité Especial ya conocía.

965. Era sumamente vergonzoso que en una época de progresos científicos sin precedentes, que ofrecían la perspectiva de condiciones de vida satisfactorias para todos, el colonialismo y los regímenes racistas ejerciesen aún dominación sobre una parte considerable de África y otros continentes y mantuviesen en la esclavitud a gran parte de la población.

966. Las Potencias coloniales y los regímenes racistas que ellas apoyaban se habían negado a aplicar las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Además, se preparaban febrilmente para prolongar su dominación sobre los pueblos colonizados e incluso se proponían emprender una recolonización progresiva. No era sorprendente por eso que ya no disimulasen su intención de formar una vasta *entente* colonialista, como habían confirmado las conclusiones del Comité Especial y las declaraciones de los representantes y de los peticionarios.

967. Era ciertamente lamentable que tras esta *entente* colonialista se percibiese una alianza más poderosa de las naciones imperialistas que protegían y fomentaban el colonialismo en el mundo. Debido a la actitud negativa de estas Potencias, el Consejo de Seguridad no había podido, como requerían justificadamente los Estados africanos, pedir al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que recurriera a todas las medidas necesarias, inclusive el uso de la fuerza, para suprimir el régimen racista minoritario establecido en Rhodesia del Sur. Sin embargo, el Gobierno de Checoslovaquia tenía la convicción de que el Comité Especial adoptaría una resolución en la que pidiese que se emplearan medidas eficaces para restituir al pueblo de Zimbabue todos sus derechos constitucionales y democráticos. Su competencia para actuar y para fijar plazos para un rápido fin del colonialismo se fundaba en el párrafo 5 de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

968. El representante del Irán recordó que en su 407a. sesión, celebrada el 20 de abril de 1966, el Comité Especial había recomendado al Consejo de Seguridad que examinara con carácter urgente las otras medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas con objeto de poner en práctica sus decisiones relativas a Rhodesia del Sur, pero que el Consejo de Seguridad no había actuado en ese sentido.

969. Por su resolución 217 de 20 de noviembre de 1965, el Consejo de Seguridad había exhortado al Gobierno del Reino Unido a que tomara medidas apropiadas para poner fin inmediatamente al régimen minoritario. Sin embargo, después de transcurridos seis meses todavía no se había realizado progreso alguno.

970. En su resolución 221, de 9 de abril de 1966, el Consejo de Seguridad había indicado que, como

los suministros de petróleo proporcionarían gran ayuda y aliento al régimen ilegal, se provocaba una situación que constituía una amenaza para la paz. Una vez llegado a esta conclusión, el Consejo de Seguridad debía adoptar las nuevas medidas pertinentes. Como el petróleo llegaba a Rhodesia del Sur desde Sudáfrica y por el puerto de Beira, al Consejo de Seguridad no le quedaba otra alternativa que actuar para evitar un quebrantamiento de la paz.

971. Las negociaciones sólo serían eficaces si dieran el resultado de poner fin al régimen; pero era difícil esperar que el Sr. Smith fuese a negociar su propia caída. La fuerza era, por tanto, la única solución.

G. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

Llamamiento al Gobierno del Reino Unido en relación con el Sr. Joshua Nkomo y con el Rvdo. N. Sithole

972. En la 423a. sesión, el representante de Malí manifestó que el Comité Especial debía estudiar a fondo la cuestión de Rhodesia del Sur y formular a ese respecto recomendaciones concretas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Propuso que el Comité Especial pidiese al Gobierno del Reino Unido que diese a los "jefes" aceptados por todos del pueblo de Zimbabue, la posibilidad de presentarse ante el Comité Especial.

973. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que apoyaba enérgicamente la propuesta del representante de Malí, en particular teniendo en cuenta que el Reino Unido insistía en que era el único responsable por Rhodesia del Sur.

974. El representante del Irán apoyó también la propuesta del representante de Malí.

975. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoyó la propuesta del representante de Malí y estimó que el Comité Especial debía pronunciarse a este respecto sin pérdida de tiempo.

976. El representante de Bulgaria manifestó que apoyaba sin reservas las propuestas del representante de Malí tendientes a pedir al Gobierno del Reino Unido que pusiese en libertad a los jefes de los movimientos de liberación que se hallaban en prisión a fin de permitirles que se presentasen a declarar ante el Comité Especial.

977. El representante del Irak apoyó la propuesta del representante de Malí. La presencia de los dirigentes nacionalistas sería de gran utilidad para las deliberaciones del Comité Especial y contribuirá a acelerar sus trabajos por la liberación de Rhodesia del Sur.

978. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que, después de las consultas que acababan de celebrarse, los miembros del grupo afroasiático habían decidido proponer que el Comité Especial pidiese al Presidente que apelase al Gobierno del Reino Unido para que hiciese poner en libertad al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole a fin de que pudieran presentarse a declarar ante el Comité. Si bien comprendía que algunos miembros podían considerar poco práctica esa medida, creía que deberían recordar que el Reino Unido pretendía ser el único responsable por Rhodesia del Sur. Además, en muchas oportunidades había dado seguridades de que estaba dispuesto a cooperar con las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta todos esos

hechos, el Comité Especial debía presentar ahora esa demanda.

979. A solicitud del representante de Yugoslavia, el Presidente dijo que el nombre de Yugoslavia se añadiría a la lista de países que habían hecho esa demanda.

980. El representante de la India apoyó la propuesta del representante de Malí y el procedimiento sugerido por el representante de Tanzania, y dijo que sería muy útil para el Comité Especial oír a representantes tan notables de la opinión pública africana como el Sr. Nkomo y el Sr. Sithole. Era lamentable que el Gobierno del Reino Unido no hubiese considerado hasta ahora conveniente consultarlos.

981. El representante de Venezuela manifestó que le parecía ampliamente justificada la propuesta del representante de Malí y que la apoyaba incondicionalmente; insistió en que la decisión fuese tomada por todo el Comité Especial y no sólo por un grupo limitado, cuya solicitud tendría menos peso frente al Reino Unido que la de un comité de las Naciones Unidas.

982. El representante de Madagascar recordó que el año anterior el Comité Especial había enviado un telegrama al Reino Unido en el mismo sentido y que este último había invocado la convención constitucional firmada con Rhodesia del Sur y la imposibilidad en que se hallaba de inmiscuirse en los asuntos internos de ese país para rechazar la solicitud del Comité. La situación había cambiado totalmente ahora que Rhodesia del Sur había proclamado unilateralmente su independencia.

983. El representante de Australia dijo que, aunque su delegación tendría el mayor interés en oír al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole, consideraba sin embargo que en este momento el Gobierno del Reino Unido no podría obtener que se los pusiera en libertad porque no eran presos del Reino Unido sino de un régimen ilegal que se había revelado contra él. La delegación australiana reservaba su posición sobre la oportunidad de esa propuesta.

984. El representante de los Estados Unidos de América observó que su delegación hubiera celebrado la oportunidad de oír a los Sres. Nkomo y Sithole, si no fuera por el hecho de que estaban detenidos por el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. La cuestión del derecho del Reino Unido a intervenir en los asuntos internos de Rhodesia del Sur no se planteaba en este caso: el régimen existente se había rebelado y probablemente el Reino Unido sólo podría traer ante el Comité Especial al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole cuando se hubiese puesto fin a esa rebelión. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos reservaba su posición a este respecto por la razón práctica de que el Reino Unido no controlaba la situación en Rhodesia del Sur.

985. El representante de Polonia manifestó su decidido apoyo a la propuesta del representante de Malí. En cuanto a las opiniones expuestas por los representantes de Australia y de los Estados Unidos, no aceptaba la idea de que el Gobierno del Reino Unido no pudiese tomar medida alguna a ese respecto. A juicio del representante de Polonia, ocurría todo lo contrario, ya que ahora existía un régimen ilegal en Rhodesia del Sur y, por consiguiente, ante las Naciones Unidas el Reino Unido era el único responsable por ese país.

986. El representante de Malí observó que el Reino Unido había prevenido desde hace mucho tiempo a Rhodesia del Sur que toda declaración unilateral de independencia sería considerada como un acto de rebelión contra la Corona, y que no se trataba de saber en este momento si estaba o no en condiciones de hacer poner en libertad al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole. Lamentaba que las delegaciones que planteaban esa objeción fuesen las mismas que siempre rechazaban las propuestas africanas tendientes a libertar a Rhodesia del Sur y al pueblo de Zimbabwe. El Comité Especial debía, pues, dirigir al Reino Unido, Potencia administradora de Rhodesia del Sur, que era una colonia británica, una solicitud para que se pusiera en libertad al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole a fin de que el Comité pudiese oírlos.

987. El Comité Especial aceptó la sugerencia del Presidente de dirigir un telegrama al Gobierno del Reino Unido en nombre del Comité Especial, pidiéndole que hiciese poner en libertad al Sr. Nkomo y al Sr. Sithole para que pudiesen presentarse ante el Comité Especial durante las sesiones que éste celebraba en Africa, en la inteligencia de que las reservas expresadas por los representantes de Australia y de los Estados Unidos constarían en la documentación pertinente.

988. En la 432a. sesión, celebrada el 4 de junio de 1966, el Presidente comunicó al Comité Especial que se había recibido un telegrama del Gobierno del Reino Unido en el que éste — contestando al llamamiento que le había dirigido el Comité Especial para obtener la puesta en libertad del Sr. Nkomo y del Sr. Sithole a fin de que pudiesen presentarse ante el Comité como peticionarios — manifestaba que, como ya sabía el Comité, dichos señores eran retenidos por el régimen ilegal de Rhodesia del Sur.

Aprobación de una resolución relativa a la cuestión de Rhodesia del Sur

989. En la 425a. sesión se sometió al Comité Especial un proyecto de resolución patrocinado por el Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia (A/AC.109/L.294).

990. Presentando este proyecto de resolución, el representante de Etiopía dijo que sus coautores habían respetado el uso y dejado veinticuatro horas a los miembros para consultar a sus gobiernos; sin embargo, dado el escaso tiempo de que se disponía en Dar es Salaam, el Sr. Mekasha esperaba que el Comité Especial no tendría inconveniente en que el proyecto de resolución fuese presentado ahora. El proyecto de resolución tendía a reflejar la opinión de todos los miembros del Comité Especial que reconocían las aspiraciones del pueblo de Zimbabwe. Los autores estaban dispuestos a examinar toda enmienda tendiente a mejorar el texto, pero rechazarían las que pudieran quitarle fuerza, porque estimaban que el proyecto de resolución representaba el mínimo que el Comité podía hacer, y juzgarían conforme a ello la sinceridad de sus miembros.

991. El representante de Malí observó que ese proyecto reflejaba la opinión de todos los miembros que habían expresado hasta ahora su punto de vista. Las medidas que en él se enunciaban representan el mínimo que el Comité Especial podía pedir a la Potencia administradora, y el representante de Malí esperaba que ese

proyecto de resolución fuese apoyado por todas las delegaciones.

992. El representante de Madagascar señaló que su delegación se había abstenido de tomar parte en el debate general que se estaba celebrando sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, pero que esta actitud de la delegación malgache no debía interpretarse como falta de interés, por su parte, en el doloroso problema de Rhodesia del Sur. Muy al contrario, este problema le causaba grandes preocupaciones, pero consideraba que el problema subsistía en su integridad, pese a algunos hechos recientes. También seguían siendo válidas las declaraciones hechas anteriormente por la delegación malgache en la Cuarta Comisión y en el Comité Especial para definir su posición. Por eso, en este momento, el orador se iba a limitar a breves observaciones sobre algunos párrafos del proyecto de resolución (A/AC.109/L.294) que el Comité tenía ante sí.

993. En el tercer párrafo del preámbulo, los patrocinadores habían considerado necesario recordar los términos de las resoluciones del Consejo de Seguridad que recomendaban la ruptura de relaciones económicas con Rhodesia del Sur y concretamente el embargo sobre el petróleo y sus productos. Existían efectivamente Estados que no se atenían a las recomendaciones de las Naciones Unidas. El llamamiento que a estos Estados se hacía para que estudiasen detenidamente su actitud parecía totalmente justificado. Por su parte, la República Malgache había adoptado las medidas necesarias y había informado de ellas al Secretario General de las Naciones Unidas mediante una nota³³. Y es más, ese país, debido a su situación geográfica en pleno Océano Índico, había considerado deber suyo conceder al Reino Unido ciertas facilidades en suelo malgache para permitirle cumplir los objetivos del Consejo de Seguridad con respecto a Rhodesia del Sur.

994. En el sexto párrafo del preámbulo, el proyecto se esforzaba por hacer resaltar la preocupación cada vez mayor de los patrocinadores por las negociaciones del Gobierno británico con el régimen de Ian Smith. La delegación malgache deseaba señalar una vez más que, aun siendo partidaria de los diálogos y negociaciones para resolver un problema, cualquiera fuese su naturaleza, no conseguía comprender que se desarrollasen negociaciones sin la participación del pueblo de Zimbabwe, cuyos intereses pretendía salvaguardar el Reino Unido. Este, al entablar negociaciones con el Sr. Ian Smith y negarse a todo diálogo con el representante de la población de Zimbabwe, daba muestra de una actitud equívoca, que llevaba a la delegación malgache a preguntarse cuál era el objetivo verdadero de su política en lo que respectaba a la suerte de los rhodesios.

995. En lo que atañía a los párrafos de la parte dispositiva, se contentaba con subrayar que su delegación convenía en deplorar que el Gobierno del Reino Unido no hubiese conseguido reducir al régimen de Ian Smith. Cabía recordar la declaración del Gobierno del Reino Unido según la cual éste proyectaría nuevas medidas contra Rhodesia del Sur si dentro de un plazo razonable se comprobara que las sanciones económicas carecían de eficacia. Ya habían transcurrido seis meses desde que el Sr. Smith proclamó unilateralmente la in-

dependencia, pero el Reino Unido ni siquiera estaba dispuesto a estudiar estas nuevas medidas de que hablaba. ¿Se trataba de una pura maniobra dilatoria?

996. En cuanto al párrafo 9 de la parte dispositiva, que encarecía al Gobierno del Reino Unido que adoptase las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, el representante de Madagascar deseaba expresar las dudas de su delegación sobre lo oportuno de esa recomendación. El resultado de la votación realizada recientemente en el Consejo de Seguridad venía a corroborar su escepticismo. La delegación malgache sabía que el Reino Unido jamás estaría dispuesto a emplear la fuerza para subyugar a rebeldes que no eran sino sus propios parientes.

997. La delegación malgache habría deseado que se estudiaran más las posibilidades de llegar a un arreglo pacífico del problema de Rhodesia del Sur, pero se adheriría a la opinión de la mayoría, en vista del poco tiempo de que disponía el Comité Especial en el presente período de sesiones.

998. El representante de Etiopía propuso que en el preámbulo se suprimiesen los párrafos segundo y séptimo y que en el cuarto párrafo se sustituyese la palabra "blanca" por "racista".

999. El párrafo 5 de la parte dispositiva debiera completarse para que quedara en la forma siguiente:

"Considera que la situación existente en Rhodesia del Sur sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, como determinó el Consejo de Seguridad en su resolución 221 (1966) de 9 de abril de 1966."

1000. El párrafo 6 de la parte dispositiva debiera quedar modificado en la forma siguiente:

"Señala una vez más a la atención del Consejo de Seguridad la gravedad de la situación que prevalece en Rhodesia del Sur, a fin de que recomiende las sanciones obligatorias que prevé el Capítulo VII de la Carta."

1001. El representante de Dinamarca dijo que su delegación no podía aceptar los párrafos 7 y 9 de la parte dispositiva. Los miembros del Comité Especial estaban de acuerdo en que el objetivo común debía ser abolir el régimen de Smith y asegurar a Zimbabwe una independencia basada en el gobierno de la mayoría. Pero los párrafos 7 y 9 de la parte dispositiva incluían los controvertibles puntos relativos al uso de la fuerza, asunto al cual se habían opuesto algunos países en el Consejo de Seguridad. La actitud de estos países no había cambiado. Por eso el citado representante consideraba que si bien este proyecto de resolución podía dar satisfacción a emociones, no por eso había de facilitar una solución. Constituía además la negación del mecanismo de las sanciones. El Comité Especial sabía que el proyecto de resolución, tal como ahora estaba redactado, no tenía probabilidad alguna de alcanzar el resultado apetecido; es más: su único resultado sería debilitar ese mecanismo y minar la confianza depositada en las Naciones Unidas. Dinamarca estimaba que las sanciones económicas podrían eliminar al régimen de Smith, y, cuando llegase el momento, permitir la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, era indispensable actuar de forma que las sanciones fuesen aplicadas por todos los Estados Miembros y dejar a las Naciones Unidas la posibilidad de intervenir en los casos de no cooperación.

³³ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1966, documento S/7213.*

1002. Refiriéndose al comentario del representante de Polonia sobre su declaración del día anterior, el representante de Dinamarca dijo que no mencionó a Portugal porque tenía entendido que el principal problema era la llegada de petróleo desde Sudáfrica. Con todo, debía señalarse que su delegación se había manifestado a favor de sanciones obligatorias, lo cual constituía una innovación. La delegación danesa había querido pedir a todos los países que aplicaran tales sanciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, ya que la única otra posibilidad sería la de obligar al cumplimiento.

1003. Como se precisaba acción inmediata, su Gobierno proponía que se suprimiesen los párrafos 7 y 9 de la parte dispositiva y se insertasen los dos párrafos nuevos siguientes:

"7. *Recomienda* al Consejo de Seguridad que pida a todos los países miembros que confirmen sin dilación que aplicarán las sanciones mencionadas en el párrafo 6, de acuerdo con la obligación que les cabe conforme a la Carta de las Naciones Unidas;

"8. *Recomienda además* al Consejo de Seguridad que, en el caso en que un Estado cualquiera no aplique la decisión del Consejo de Seguridad mencionada en el párrafo 6, estudie las medidas apropiadas que hayan de adoptar las Naciones Unidas, conforme a las disposiciones del Capítulo VII de la Carta, para garantizar la aplicación efectiva de sanciones con miras a la rápida abolición del régimen racista de Rhodesia del Sur;"

El párrafo 8 de la parte dispositiva pasaría entonces a ser párrafo 9.

1004. Lamentaba la observación del representante de Etiopía de que el Comité Especial sería juzgado por su voto sobre el proyecto de resolución. Si el representante de Dinamarca hubiera deseado expresarse con el mismo espíritu, habría dicho que los países africanos y occidentales serían juzgados por su forma de actuar en relación con la enmienda propuesta por su país (A/AC.109/L.295).

1005. El representante de Chile propuso que en el proyecto de resolución examinado se introdujesen las enmiendas siguientes (A/AC.109/L.296): después del último párrafo del preámbulo, la adición de un nuevo párrafo:

"*Tomando en cuenta* las decisiones de la Organización de la Unidad Africana con respecto a la difícil situación que confronta Zambia como consecuencia de la declaración unilateral de independencia en Rhodesia del Sur;"

Después del párrafo 3 de la parte dispositiva, la inserción de un nuevo párrafo:

"*Pide* a todos los Estados Miembros que proporcionen toda la ayuda necesaria al pueblo de Zambia para hacer frente a la difícil situación que se le presenta como consecuencia de la declaración unilateral de independencia en Rhodesia del Sur;"

1006. El representante de Venezuela manifestó que su delegación estaba perfectamente de acuerdo con el fondo del proyecto, que contenía una serie de principios que ella defendía. Pero habiendo los autores dicho claramente que no aceptarían que el proyecto de resolución se modificase, el citado representante desearía formular algunas observaciones.

1007. Ante todo, apoyaba las dos enmiendas que acababa de presentar el representante de Chile (A/AC.109/L.296), y que no exigían ninguna explicación. Pidió que se las sometiese a votación nominal separadamente.

1008. La delegación de Venezuela deseaba precisar que el hecho de que sostuviese honestamente los principios que consideraba fundamentales no significaba que su posición con respecto al colonialismo hubiese cambiado. La verdad no pertenecía a un solo hombre ni a un solo grupo de hombres. Era muy fácil decir que quien no acepte incondicionalmente lo que decidimos está contra nosotros. Y si la delegación de Venezuela aprobaba el proyecto de resolución en su fondo, se veía precisada a expresar ciertas reservas sobre los métodos utilizados para alcanzar el fin común y sobre la forma de ciertos párrafos del proyecto.

1009. En lo concerniente al párrafo 5 del preámbulo, el representante de Venezuela hizo observar que no correspondía al Comité Especial recomendar el empleo de la fuerza. Esa prerrogativa le estaba reservada exclusivamente al Consejo de Seguridad, en casos de suma gravedad. Evidentemente, la situación era grave en Rhodesia del Sur; ello no obstante, recurrir al empleo unilateral de la fuerza sería sentar un precedente peligroso. El recurso a la fuerza debía ser sólo de índole colectiva y bajo el control de las Naciones Unidas.

1010. Además, en ese párrafo parecía que se insistía en restablecer la Constitución de 1961, mucho más que en aplicar la resolución 1514 (XV), que era en realidad la cuestión que estaba en el orden del día. El representante de Venezuela citó al respecto las palabras que había pronunciado en el curso del último debate general consagrado a esa cuestión en Nueva York (A/AC.109/PV.405, págs. 4 a 6).

1011. La delegación de Venezuela sólo podría votar a favor de ese párrafo si se suprimía la frase "incluso el empleo de la fuerza militar". Sin embargo, podría aceptar que después de las palabras "medidas inmediatas" se insertasen las palabras "y más enérgicas".

1012. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, la delegación de Venezuela no creía que el Comité Especial estuviese facultado para condenar a gobiernos de Estados Miembros. Sólo el Consejo de Seguridad estaba investido por la Carta del poder de pronunciar tal condenación, cuya consecuencia lógica era la expulsión del Estado Miembro de que se tratase. Venezuela sólo podía votar a favor de ese párrafo si entre las palabras "condena" y "gobiernos" se insertaran las palabras "la política de los".

1013. Del mismo modo, sólo el Consejo de Seguridad tenía la facultad de adoptar una decisión como la que se preveía en el párrafo 7 de la parte dispositiva. La delegación de Venezuela no podía de ningún modo aceptar que se autorizase a un Estado Miembro a emplear unilateralmente la fuerza. Con ello se sentaría un precedente peligroso para la existencia misma de la comunidad internacional. Los países de América Latina tenían una larguísima y muy amarga experiencia de lo que podía ser el empleo de la fuerza por un Estado para aceptar sin protestar que el Comité Especial legitimase mediante una votación el que un Estado Miembro recurriera a la fuerza, recurso justificado por argumentos de un valor dudoso. Una gran Potencia podía siempre hallar justificaciones para su acción, y no era necesario que el Comité le proporcionase un pre-

cedente en que apoyarse. Por ello, Venezuela aprobaba la enmienda A/AC.109/L.295, presentada por la delegación de Dinamarca. Además, no había que olvidar que, al aprobar ese párrafo, los Estados miembros del Comité Especial renunciarían a todo derecho a criticar la determinación del Reino Unido de conservar sus bases militares, pues éstas les serían entonces necesarias para poner en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas. La delegación de Venezuela pedía que se suprimiese el párrafo 7, ya que la idea que contenía estaba ya expresada en el párrafo 6.

1014. Por último, en lo concerniente al párrafo 9, el representante de Venezuela expresó con respecto a la frase "incluido el uso de la fuerza" las mismas reservas que había expresado con respecto al párrafo 5 del preámbulo. Le parecía suficiente la expresión "todas las medidas necesarias". Si la Potencia administradora consideraba necesario recurrir a la fuerza, debía hacerlo bajo su sola responsabilidad, y no con el apoyo de las Naciones Unidas. La delegación de Venezuela pedía que se suprimiese la referida frase y apoyaba, pues, la enmienda de Dinamarca.

1015. Por último, la delegación de Venezuela pidió que se procediese a votación nominal separadamente sobre el párrafo 5 del preámbulo y los párrafos 3, 7 y 9 de la parte dispositiva, en la inteligencia de que esa votación no sería necesaria para los párrafos 7 y 9 de la parte dispositiva si se aprobaba la enmienda danesa.

1016. El Presidente, hablando como representante de Sierra Leona, dio las gracias al representante de Dinamarca por su aportación al debate. Sierra Leona, lo mismo que los demás Estados africanos, había apreciado siempre los esfuerzos que habían hecho los países escandinavos, y sobre todo Dinamarca, por que los problemas de África se enfocasen con un nuevo criterio.

1017. El representante de Dinamarca había declarado que el proyecto de resolución presentado al Comité Especial (A/AC.109/L.294) contenía los mismos puntos controvertibles que el proyecto de resolución presentado recientemente al Consejo de Seguridad³⁴. Así era: se los había incluido otra vez porque reflejaban la opinión — no sólo de los países africanos sino también de muchos otros países — de que había llegado el momento de emplear la fuerza. Los representantes de Venezuela, los Estados Unidos y Australia habían argumentado en contra de esa acción, junto con el representante de Dinamarca, quien había advertido a los africanos que ello haría que se debilitase el instrumento de las sanciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, ese instrumento se había debilitado ya por culpa de los países que, hacía apenas un mes, apoyaron una resolución del Reino Unido en el Consejo de Seguridad en la que se invocaba el Capítulo VII de la Carta y se preconizaba el uso de la fuerza para hacer que dos buques petroleros no tocasen en Beira. Esos mismos países se negaban ahora a apoyar la mención del mismo Capítulo ante una situación que constituía una grave amenaza a la paz del mundo. Además, los mismos países que emprendieron la acción del Congo, sin consultar siquiera al Consejo de Seguridad, por considerar que un pequeño número de europeos corrían peligro, se preocupaban ahora de que pudiera emplear-

se la fuerza en Rhodesia del Sur, donde cuatro millones de africanos vivían en las condiciones más penosas.

1018. La situación existente en Rhodesia del Sur podría muy bien poner en peligro la paz del mundo entero. Por ejemplo, dicha situación afectaba ya a Zambia, y los Estados africanos no estaban dispuestos a tolerar más tal estado de cosas. El representante de Venezuela había hablado con mucho calor de la experiencia que él tenía sobre el empleo de la fuerza en América Latina. Si bien los Estados africanos respetaban sus opiniones, no les quedaba otra cosa que hacer si querían derrocar al régimen ilegal de Smith.

1019. El representante de Dinamarca también había considerado que el empleo de la fuerza podría debilitar la confianza internacional en las Naciones Unidas. La confianza en las Naciones Unidas se había debilitado ya en relación con varias situaciones que se produjeron en África, donde permaneció impotente y poco dispuesta a adoptar medidas. El representante de Dinamarca había afirmado asimismo que el proyecto de resolución presentado al Comité no tenía ninguna posibilidad de ser aceptado si se lo presentaba al Consejo de Seguridad. Los Estados africanos, lejos de ignorar, sabían perfectamente que ciertos países estaban dispuestos a dar efectividad práctica a las declaraciones de sus representantes sobre ciertas cuestiones de principio. La confianza internacional en las Naciones Unidas no se podía mantener mediante maniobras parlamentarias, sobre todo en una cuestión como la situación de Rhodesia del Sur, que para muchos era una cuestión de vida o muerte. El hecho de que muchas de las batallas contra el colonialismo hubiesen sido ganadas fuera de las Naciones Unidas poco o nada contribuía a realzar la dignidad y el prestigio de éstas.

1020. Por último, el representante de Sierra Leona dijo que la cuestión de Rhodesia del Sur, que había sido debatida ampliamente en muchas partes del mundo, constituiría la prueba decisiva por que habían de pasar las Naciones Unidas y sus principios. El representante exhortaba a todos los que estaban verdaderamente interesados en el porvenir de la Organización a que examinasen la cuestión desde ese punto de vista.

1021. El representante de Etiopía dijo que el representante de Dinamarca se había opuesto a la declaración que él formulara en la sesión anterior del Comité Especial, en el sentido de que la sinceridad de los miembros y su apoyo al pueblo africano de Zimbabwe se juzgarían por su reacción ante el proyecto de resolución. Ello no obstante, el representante de Etiopía no se proponía retractarse de lo dicho. Su delegación respetaba la manera en que el representante danés se había expresado y a su vez esperaba de éste el mismo respeto.

1022. Además, el propio representante de Dinamarca se había servido de una frase análoga al decir que él juzgaría al Comité Especial por la forma en que reaccionase ante las enmiendas propuestas por su delegación (A/AC.1/L.295). Pero era importante tener presente lo esencial, y como el Presidente había dicho, el apoyo prestado por Dinamarca en diversas cuestiones que afectaban al África, tanto en el Comité como en otros órganos de las Naciones Unidas, tenía alto valor. Era motivo de satisfacción tomar nota de que la delegación de Dinamarca estaba dispuesta a apoyar el proyecto de resolución, con excepción de dos párrafos. Las deliberaciones del Comité se habían desenvuelto hasta ahora en forma digna. El representante de Etiopía con-

³⁴ *Ibid.*, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7825/Add.1.

fiaba en que en lo futuro no habría de disminuir ese gran ejemplo con intervenciones tales como la del representante de Dinamarca.

1023. El representante de Dinamarca, refiriéndose a las observaciones del representante de Sierra Leona, dijo que no impugnaba el derecho de algunos miembros a presentar otra vez en el Consejo de Seguridad los mismo puntos controvertibles que figuraban en el proyecto de resolución rechazado por ese órgano hacía poco. Su única preocupación era hallar una solución que ayudase al pueblo de Zimbabwe. Como era poco probable que se modificase el criterio de la mayoría en el Consejo de Seguridad, el representante de Dinamarca había intentado lo mismo por otro camino que pudiera ser aceptable para todos y permitiese eliminar el régimen de Smith.

1024. El representante de Sierra Leona se había referido también a su aseveración de que el empleo de la fuerza debilitaría el instrumento de las sanciones de las Naciones Unidas. La delegación de Dinamarca coincidía en que los Estados africanos no eran responsables de eso. Sin embargo, si en vez de las sanciones se aplicase la fuerza se podría tomar tal cosa como señal de que dichos Estados habían fracasado, lo cual beneficiaría sólo a Sudáfrica. A juicio del representante de Dinamarca, los resultados más eficaces se obtendrían si el Comité Especial recomendase sanciones obligatorias como las que se proponían en el proyecto de resolución. Si cualquier país dejase de cumplir dicha decisión, se debería entonces pedir al Consejo de Seguridad que considerase la intervención.

1025. El representante de Sierra Leona había dicho después, acertadamente, que el Consejo de Seguridad había aprobado ya el empleo de la fuerza al permitir que naves de guerra del Reino Unido desviasen dos buques petroleros que se dirigían a Beira. Sin embargo, muy probablemente los países que votaron a favor de esa acción en el Consejo de Seguridad consideraron que ello no supondría pérdida de vidas, al paso que la intervención armada, como se proponía en el proyecto de resolución, podría ser el comienzo de una guerra.

1026. El representante de Dinamarca deploró la afirmación del representante de Sierra Leona de que en Africa se había debilitado la confianza en las Naciones Unidas, y que se la consideraba una organización impotente. El Gabinete danés, que se había reunido la noche anterior para examinar la cuestión, había convenido en que habría que aplicar sanciones obligatorias, y en que se debería autorizar al Consejo de Seguridad a intervenir, según correspondiere, si se violase la decisión adoptada a tal efecto. Entonces no podría haber ninguna excusa para que un país cualquiera dejase de apoyar una decisión del Consejo de Seguridad encaminada a intervenir en tales casos. El representante de Dinamarca estaba firmemente convencido de que esa solución de transacción era la que ofrecía la mayor posibilidad de que se llegase a un acuerdo en el seno de las Naciones Unidas y, por consiguiente, de que se ayudase a la población zimbabwense.

1027. El Presidente, hablando como representante de Sierra Leona, explicó que, al hablar de la impotencia de las Naciones Unidas en Africa, se había referido a sus actividades en lo concerniente a la situación de Rhodesia del Sur.

1028. Su delegación acogía con agrado la iniciativa de Dinamarca de apoyar las sanciones obligatorias, y

esperaba que su apoyo se extendiese a las partes del proyecto de resolución que se referían al empleo de la fuerza.

1029. El representante de Malí, hablando como coautor del proyecto de resolución presentado por el grupo afroasiático y Yugoslavia, observó que estaba muy agradecido al representante de Dinamarca por haber propuesto una enmienda a ese proyecto de resolución, y no podía sino lamentar el no disponer del texto francés de ese documento, lo que le habría permitido comentarlo con más conocimiento de causa.

1030. Hasta donde le era dable al representante de Malí juzgar, el representante de Dinamarca parecía considerar que el Gobierno británico no era responsable en absoluto del agravamiento de la situación en Sudáfrica y en Rhodesia del Sur. La enmienda danesa afectaba a dos párrafos esenciales del proyecto de resolución; ahora bien, Dinamarca no podía aprobar las iniciativas adoptadas por el Gobierno de Ian Smith, que ningún país del mundo había querido reconocer, y no podía atribuir más que al Gobierno británico toda la responsabilidad de la situación así creada.

1031. El grupo afroasiático y la delegación de Yugoslavia coincidían en pedir a la Potencia administradora que adoptase todas las medidas encaminadas a embargar el petróleo y sus derivados, para que ninguno de esos productos llegase a Rhodesia del Sur. Pedían también que se aplicase la disposición de la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, relativa a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

1032. Por otra parte, si había que atenerse a la lógica del representante de Dinamarca, sobre todo en lo concerniente a su enmienda al párrafo 8 del proyecto de resolución (A/AC.109/L.294/Rev.1), parecía que fuesen los demás Estados los que no habían querido aplicar las disposiciones de la resolución 217 del 20 de noviembre de 1965. La delegación de Malí estimaba que la referida enmienda, de haber sido presentada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubiera sido aplaudida y aceptada. Lo cierto, por desgracia, era que, desde hacía seis meses, el Reino Unido parecía hacer causa común con Rhodesia del Sur. La delegación de Malí estimaba, pues, que eran los monopolios capitalistas y los países de Occidente los que debían modificar su posición, puesto que consideraba que las delegaciones no tenían por qué modificar la suya.

1033. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que, en lo tocante al fondo, su delegación apoyaba el proyecto de resolución presentado por el grupo afroasiático y Yugoslavia con la signatura A/AC.109/L.294/Rev.1, pero con ciertas reservas. A su juicio, era inútil el párrafo 5 del preámbulo del proyecto de resolución (A/AC.109/L.294), pues estaba ya expresado en el párrafo 4 del preámbulo del nuevo documento: la redacción de ese párrafo no daba cuenta de la situación tal como se presentaba actualmente, pues era evidente que las medidas adoptadas por el Reino Unido en lo concerniente a sus demás colonias eran ilegales. No era menos cierto que ese país se había visto precisado a emplear la fuerza contra los pueblos de sus colonias. En consecuencia, el hecho de hacer figurar un párrafo así concebido en el proyecto de resolución equivaldría a decir, en ese mismo párrafo, que el Reino Unido había empleado la fuerza "ilegalmente" en algunas de sus colonias. Convendría,

pues, hablar de empleo "ilegal" de la fuerza militar en el párrafo 4 del nuevo texto.

1034. En segundo lugar, el representante de la Unión Soviética estimaba que convendría añadir al proyecto de resolución una disposición por la que se fijase la fecha de la independencia de Rhodesia del Sur. Se sabía que los políticos británicos basaban enteramente su línea de conducta para con Rhodesia del Sur en la Constitución racista de 1961, que excluía la participación del pueblo de Zimbabwe, o sea de 4.500.000 personas, en las elecciones libres. En función de esa constitución, y teniendo en cuenta la situación actual, era evidente que el pueblo de Zimbabwe no podría participar en elecciones libres sino dentro de cuarenta y un años. La delegación de la Unión Soviética apoyaba, pues, la propuesta del representante de la India encaminada a fijar la fecha en que el pueblo de Zimbabwe podría obtener la independencia. Además, estimaba que la resolución ganaría en vigor si precisase qué medidas concretas había que adoptar para organizar elecciones libres basadas en el sufragio universal, quedando entendido que esas elecciones se realizarían en una fecha fijada de antemano y estarían bajo el control de las Naciones Unidas o de la Organización de la Unidad Africana.

1035. La delegación de la Unión Soviética reclamaba la abolición inmediata de la legislación por la que se instituyó la discriminación racial en Rhodesia del Sur; reclamaba sobre todo, para el pueblo de Zimbabwe, el derecho a la libertad de palabra y de opinión, a la libertad de prensa y a una actividad política. Esa petición se justificaba tanto más cuanto que, habiendo el Reino Unido admitido la ilegalidad del régimen de Ian Smith, no podía invocar para su defensa el principio de no injerencia en los asuntos internos del país.

1036. El Reino Unido era totalmente responsable de la situación tal como se presentaba. Conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad, debía acabar con el régimen de Ian Smith y adoptar medidas para confiar el poder a una mayoría elegida normalmente dentro de plazos bien definidos.

1037. El proyecto de resolución presentado al Comité Especial se robustecería mucho si contuviese disposiciones a ese efecto; la delegación soviética pedía, pues, a los autores de ese proyecto que se sirviesen prever la posibilidad de introducir tales disposiciones en su texto.

1038. En cuanto a las sanciones, se invitaba a los miembros del Comité Especial a que aguardasen a que ellas hubiesen demostrado su eficacia contra el régimen de Ian Smith. Ahora bien, era evidente que el principio de las sanciones no había dado los resultados que de él se esperaban. Por ello, la delegación de la Unión Soviética deseaba que se adoptasen medidas más eficaces y apoyaba plenamente el párrafo 3 del nuevo proyecto de resolución, en que se condenaba la ayuda que los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica no habían cesado de prestar al régimen racista y minoritario de Ian Smith. Reiteraba su adhesión a los demás párrafos del proyecto de resolución, sin dejar de estimar que éste ganaría si se lo reforzase con las disposiciones cuya adopción acababa de proponer su delegación.

1039. La delegación de la Unión Soviética deseaba también hacer conocer su parecer sobre la declaración presentada la víspera por el representante de los Estados Unidos, a la que no podía menos que oponerse.

En efecto, el representante de los Estados Unidos había tratado de justificar el fracaso de las sanciones aplicadas por su Gobierno, pues los Estados Unidos ocupaban posiciones importantísimas en la economía de los territorios examinados y se veían obligados a tener en cuenta la opinión de los hombres de negocios. Según el representante de la Unión Soviética, a los países socialistas les era fácil ajustarse a las disposiciones relativas a las sanciones, ya que su economía estaba planificada, en tanto que vínculos económicos estrechos unían a los Estados Unidos con Rhodesia del Sur y Sudáfrica.

1040. En efecto, los países socialistas habían adoptado el partido de los pueblos que luchaban por su independencia, mientras que los Estados Unidos y la República Federal de Alemania tenían por objetivo aplastar los movimientos de liberación nacional, aferrarse a sus posiciones y continuar explotando a las poblaciones de los territorios que ocupaban. El representante de los Estados Unidos había declarado que su Gobierno no hacía un doble juego, lo que no le había impedido añadir que los Estados Unidos se ponían de parte del Reino Unido cuando éste se negaba a modificar la Constitución de 1961. ¿No era ese un ejemplo perfecto de doble juego?

1041. El representante de Dinamarca había declarado que era partidario de dar carácter obligatorio a las sanciones. Ahora bien, el párrafo 6 del nuevo proyecto de resolución preveía ya ese punto. En consecuencia, la enmienda presentada por el representante de Dinamarca tendía a diferir la aplicación de las disposiciones previstas en ese párrafo; ello no haría sino beneficiar a los países que consideraban que, una vez aplicadas esas sanciones, el problema quedará resuelto.

1042. El representante de Túnez declaró que, dadas la elocuencia, la claridad y la precisión con que el Presidente del Comité Especial, en su carácter de representante de Sierra Leona, había traducido el sentir de millones de africanos a quienes las condiciones de servidumbre en que se veían mantenidos les impedían expresarse por sí mismos, se limitaría a recordar que todos los peticionarios habían testimoniado en varias ocasiones su fe inquebrantable en las Naciones Unidas. No era menos cierto que si las Naciones Unidas permanecían pasivas, perderían su autoridad, no por obra de los pueblos africanos, sino por obra de ciertos Estados Miembros que, por razones que sería inútil buscar en la Carta, se alegrarían mucho si se minara esa autoridad.

1043. La delegación de Túnez votaría a favor del proyecto de resolución del grupo afroasiático, y estaba convencida de que la mayoría de los miembros del Comité Especial la seguiría por ese camino.

1044. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que valoraba el espíritu con que el representante de Dinamarca había instado al Comité a moderarse en la formulación del proyecto de resolución. Sin embargo, su delegación tenía grandes reservas que hacer en cuanto a los fundamentos que respaldaban las enmiendas danesas, pues consideraba que éstas trataban de excusar las acciones del Gobierno del Reino Unido. El representante de la República Unida de Tanzania exhortaba al representante de Dinamarca a que retirase sus enmiendas.

1045. El representante de Bulgaria observó que en el curso de la presente reunión del Comité Especial la

situación explosiva de Rhodesia del Sur había entrado en una fase decisiva. La mayoría de las delegaciones representadas en el seno del Comité se habían desalentado mucho ante el resultado de la votación sobre el proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad.

1046. El representante de Bulgaria estimaba, pues, que el Comité debería por lo menos elaborar un proyecto de resolución eficaz en el que se resumiesen los principales puntos del proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad, pues ese proyecto había obtenido la mayoría de los votos de todos los países que querían sinceramente la libertad del pueblo de Zimbabue.

1047. El representante de Bulgaria apoyaba en principio el proyecto de resolución (A/AC.109/L.294/Rev.1), que coincidía con la opinión de esa mayoría, y admiraba la conmovedora declaración del Presidente. Los pueblos africanos en lucha quizá tuviesen razón en perder la confianza que habían depositado en las Naciones Unidas. Otros miembros del Comité habían expuesto el punto de vista de sus gobiernos, según el cual convenía fundamentalmente hacer todo lo posible para preservar esa confianza. En el curso del último período de sesiones de la Asamblea General, Dinamarca había tenido la valentía de votar a favor de la resolución contra el apartheid, de lo cual había que alegrarse; esto no obstante, el representante de Bulgaria no aprobaba la enmienda danesa.

1048. El representante de Venezuela había expresado el punto de vista de los países latinoamericanos. Era evidente que esos países no admitían que se pudiese hacer uso de la fuerza contra los movimientos populares, y sin duda tenían la vista puesta en los Estados Unidos. Sin embargo, no cabía comparar la intervención de los Estados Unidos en América Latina con la situación que se presentaba en Rhodesia del Sur.

1049. La delegación de Bulgaria apoyaba el proyecto de resolución. Además, deseaba que se tuviesen en cuenta las sugerencias del representante de la India tendientes a fijar una fecha límite para la independencia de Rhodesia del Sur y para el derrumbamiento del régimen de Ian Smith.

1050. La delegación de Bulgaria consideraba apropiada la propuesta del representante de la Unión Soviética relativa al párrafo 4 del preámbulo del nuevo proyecto de resolución presentado por el grupo afroasiático y Yugoslavia (A/AC.109/L.294/Rev.1). En su redacción actual, el texto de ese párrafo no le parecía suficientemente claro; su delegación sólo podía, pues, sugerir a sus amigos afroasiáticos, autores de la misma, que hallasen una fórmula que permitiese eliminar el equívoco que subsistía.

1051. Por último, el representante de Bulgaria recordó que en el momento en que el Comité Especial oía las intervenciones de los peticionarios, y sobre todo las que versaban sobre Rhodesia del Sur, su delegación había pedido que se informase al Comité sobre la aplicación de las resoluciones adoptadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas, especialmente en lo concerniente a la ayuda a los refugiados y a las víctimas del colonialismo. Al parecer, las decisiones así adoptadas afectaban especialmente a Rhodesia del Sur y a los territorios bajo dominación portuguesa. El Comité Especial tenía, pues, derecho a pedir a dichos órganos competentes que prestasen ayuda a los refugia-

dos y a todas las víctimas del colonialismo. La delegación de Bulgaria sugería, pues, a los autores del proyecto de resolución que intercalasen entre el párrafo 10 y el párrafo 11 de la parte dispositiva, que pasaría entonces a ser párrafo 12, un nuevo párrafo 11 cuyo texto podría ser poco más o menos el siguiente:

"Pide a los organismos especializados competentes y a las demás organizaciones internacionales de asistencia que presten toda la ayuda posible a los refugiados de Rhodesia del Sur y a las personas que sufren a consecuencia de la opresión que ejerce el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur."

1052. Debido a la falta de tiempo, el representante de Bulgaria sólo había podido someter su sugerencia (A/AC.109/L.297) a algunos de los autores del proyecto de resolución, que tuvieron a bien prometerle su apoyo. Se excusaba ante aquellos a quienes no había podido consultar al respecto, y pedía a todos que tomasen en cuenta su propuesta.

1053. El representante de la Costa de Marfil señaló que apoyaba la observación formulada por el representante de Sierra Leona en la sesión precedente a propósito del proyecto de resolución y se limitaba a agregar, en su carácter de coautor del proyecto, que todos los miembros del Comité Especial estaban de acuerdo en admitir que la situación en Rhodesia del Sur era extremadamente grave, y así lo confirmaba el hecho de que el Reino Unido hubiese apelado dos veces a las Naciones Unidas para que ratificaran las sanciones adoptadas y les autorizaran a emplear la fuerza para aplicarlas. El Reino Unido no se encontraría en esa situación si, como decía Lyautey, hubiese "mostrado su fuerza para no tener que utilizarla" después del día de la declaración unilateral de independencia de Rhodesia. Ahora bien, en este momento sólo se proponían sanciones económicas y podía sorprender que fuesen precisamente los países que las declararon inoperantes cuando se trató de Sudáfrica los que ahora las preconizasen. De todas maneras, no tendrían efecto antes de dos años ni podían ser aplicadas sin un apoyo logístico y militar.

1054. El representante de Polonia afirmó que, en general, el proyecto de resolución concordaba con los puntos de vista de su delegación. No obstante, había esperado que los patrocinadores hubieran consentido en incluir en el preámbulo una referencia a las declaraciones de los peticionarios. El cuarto párrafo del preámbulo debía también redactarse nuevamente para poner de relieve que el uso de la fuerza por el Gobierno del Reino Unido en los casos en cuestión había sido injustificado.

1055. En lo referente al párrafo 8 de la parte dispositiva, importaba no solamente liberar al país del régimen de Smith, sino que se debían tomar medidas para que la población pudiera expresar sus deseos en fecha próxima mediante elecciones libres, y el párrafo debía tomar en cuenta este punto. Al respecto, el representante de Polonia citó un párrafo de *The Economist* del 30 de abril, que recordaba una declaración del Primer Ministro Wilson de noviembre de 1965 al efecto de que tomaría un tiempo muy largo, sobre la base de las realizaciones de los políticos africanos y europeos, para establecer el tipo de democracia liberal que necesitaba Rhodesia del Sur. *The Economist* sugería que un calendario "objetivo" de este tipo debía formar parte integrante de cualquier arreglo constitucional, de manera

que los propios africanos pudiesen actuar en defensa de sus derechos mediante un "tercio opositor" de representantes parlamentarios africanos de color. Pero su Gobierno era contrario a que se permitiese a la minoría racista de Sudáfrica, Rhodesia del Sur y las colonias portuguesas ganar tiempo para aumentar su fuerza y en el proyecto de resolución se debía insistir en que se celebrasen elecciones inmediatamente después del derrumbe del régimen de Smith.

1056. Al orador le complacía que el representante de Dinamarca hubiese admitido que Portugal desempeñaba un papel importante en el fracaso de las sanciones y que la enmienda que presentaba estuviese dirigida a todos los Estados lo que, por supuesto, también incluía a otra Potencia de la OTAN, la República Federal de Alemania, que apoyaba a los regímenes coloniales de la región.

1057. El representante de Polonia apreciaba el sincero deseo del representante de Dinamarca de hacer obligatorias las sanciones, pero consideraba que el país que no desease aplicarlas no lo haría aunque fuesen obligatorias. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad debía pedir al Reino Unido que emplease todos los medios en su poder, incluso el uso de la fuerza, si fuese necesario, para derribar el régimen de Smith y permitir al pueblo de Zimbabwe el ejercicio de su derecho a la independencia y a la libertad.

1058. El representante de Dinamarca, haciendo referencia al argumento del representante de la URSS de que la posición dinamarquesa era inconsecuente, señaló que la cuestión de las sanciones obligatorias se trataba en el párrafo 6 de la parte dispositiva sobre el cual no había hecho comentarios. La enmienda de Dinamarca (A/AC.109/L.295) se refería a los párrafos 7 y 9, donde se trataba del uso de la fuerza.

1059. En respuesta al representante de Tanzania, que había afirmado que Dinamarca trataba de evitar una resolución enérgica, señaló que lo que su Gobierno deseaba evitar era una resolución que no pudiese conducir a resultados prácticos. De hecho, Dinamarca había aplicado sanciones, pero deseaba que las sanciones fuesen obligatorias porque algunos otros países hasta ahora no las habían aplicado. En respuesta al representante de Polonia, que creía que esos países probablemente no aplicarían las sanciones, fueren o no obligatorias, el representante de Dinamarca observó que en el caso de las sanciones obligatorias existía una base legal para que las Naciones Unidas interviniesen para hacerlas cumplir.

1060. Prosiguiendo en idioma francés, se asombró por las observaciones del representante de la Costa de Marfil sobre los países que se habían negado a aplicar las sanciones obligatorias a Sudáfrica. El representante de la Costa de Marfil debía saber que Dinamarca aprobó esas sanciones. Pero como no se tomó ninguna decisión efectiva, nadie tenía obligación de aplicarlas. Dinamarca había presentado su enmienda para obligar a los Estados Miembros a negar su apoyo al régimen de Rhodesia del Sur.

1061. El representante de Dinamarca había tomado nota de los puntos mencionados por el representante de Malí, los consideraba como un tributo rendido al esfuerzo constructivo de la delegación dinamarquesa y los comunicaría a su Gobierno.

1062. El representante de Etiopía, en nombre de los patrocinadores, informó que, después de haber considerado las diferentes enmiendas presentadas, habían de-

cidido, en un espíritu de transacción y comprensión, aceptar lo siguiente:

1063. Al final del párrafo 6 de la parte dispositiva, de conformidad con la propuesta formulada por el representante de Dinamarca, se agregarían las palabras "y adopte las medidas que procedan para conseguir la aplicación eficaz de sanciones en caso de que algún Estado Miembro se niegue a aplicarlas".

1064. Se agregaría un nuevo párrafo 11 a la parte dispositiva, de conformidad con la enmienda propuesta por Bulgaria (A/AC.109/L.297) que diría lo siguiente:

"Pide a los organismos especializados competentes y a las demás organizaciones internacionales de asistencia que presten toda la ayuda posible a los refugiados de Rhodesia del Sur y a las personas que sufren a consecuencia de la opresión que ejerce el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur."

El anterior párrafo 11 se convertiría en párrafo 12.

1065. La palabra "injusto" se agregaría entre las palabras "empleo" y "de" en la tercera línea del cuarto párrafo del preámbulo, para tomar en cuenta la sugerencia formulada por los representantes de la URSS y de Polonia.

1066. De conformidad con la otra propuesta del representante de Polonia, se sustituirían las palabras "un régimen" de la tercera línea del párrafo 8 de la parte dispositiva por las palabras "un gobierno elegido", y se agregarían al final de ese párrafo las palabras "y fijar con este propósito una fecha próxima".

1067. Preguntó a los representantes de Venezuela y de Chile si convenían en retirar su enmienda (A/AC.109/L.296), ya que el problema concreto de que se trataba en el proyecto de resolución era la derrota del régimen de Smith, con lo que naturalmente mejoraría los problemas de Zambia.

1068. El representante de Chile aclaró que, al formular su enmienda relativa a Zambia, las delegaciones de Venezuela y de Chile creyeron indispensable, al hablar de los refugiados, que se mencionara también a las poblaciones de Zambia oprimidas por el régimen de Ian Smith. El representante de Chile comprendía la actitud del representante de Tanzania (A/AC.109/SR.424) y proponía, en espíritu de conciliación, agregar simplemente a la enmienda búlgara (A/AC.109/L.297) entre las palabras "Rhodesia del Sur" y las palabras "y a las personas que sufren..." la expresión "al pueblo de Zambia", lo que cambiaría el sentido de dicha enmienda.

1069. El representante de Venezuela anunció que, a pedido de sus amigos africanos, las delegaciones de Chile y de Venezuela retiraban su enmienda (A/AC.109/L.296).

1070. El representante de la República Unida de Tanzania opinó que las palabras "algún Estado Miembro" que figuraban en la enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva debían sustituirse por las palabras "algún Estado".

1071. El representante de Polonia juzgó que no se había tomado en cuenta su propuesta de incluir en el preámbulo una referencia a las declaraciones formuladas por los peticionarios, práctica seguida desde la creación del Comité de los Diecisiete.

1072. El representante de la República Unida de Tanzania aceptó la propuesta en nombre de los patrocinadores.

1073. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que su delegación estaba muy satisfecha al comprobar que los representantes de los países africanos y asiáticos, al menos en parte, habían tenido en cuenta las recomendaciones de su país. El representante de la URSS votaría a favor del proyecto de resolución.

1074. El representante de Bulgaria pidió al representante de Chile que no insistiese en modificar la enmienda presentada por la delegación búlgara, ya que ésta se refería especialmente a la cuestión de Rhodesia del Sur. Si las delegaciones de Chile y Venezuela habían aceptado retirar su enmienda a consecuencia de las observaciones del representante de Tanzania (A/AC.109/SR.424), por la misma razón podían retirar su modificación a la enmienda búlgara.

1075. El orador declaró, además, que votaría por el proyecto de resolución, con las modificaciones que acababan de introducir sus autores.

1076. El representante de Dinamarca agradeció a los autores del proyecto de resolución que hubiesen tomado en cuenta parte de la enmienda que propuso. No obstante, ya había declarado anteriormente que su delegación no podía aceptar los párrafos 7 y 9 de la parte dispositiva. Como los patrocinadores no podían aceptar sus propuestas alternativas, retiraría su enmienda, pero no podría votar a favor del proyecto de resolución.

1077. El Presidente dio lectura al proyecto de resolución (A/AC.109/L.294/Rev.1) donde se incorporaban las enmiendas aceptadas por los patrocinadores.

1078. El representante del Irán propuso que se suprimiesen las palabras "de asistencia" entre las palabras "organizaciones internacionales" y las palabras "que presten..." en el nuevo párrafo 11 de la parte dispositiva; y que se suprimiesen en el mismo párrafo las palabras "a los refugiados de Rhodesia del Sur y", por razones similares a las que provocaron el retiro de la enmienda propuesta por los representantes de Chile y Venezuela.

1079. El representante de Etiopía declaró que el representante del Irán había accedido a no insistir sobre los puntos sugeridos en relación al párrafo 11 de la parte dispositiva.

1080. El representante de Australia recordó la acción positiva y pronta de su Gobierno en la aplicación del tipo de medidas recomendadas por el Consejo de Seguridad. Su Gobierno estaba lejos de creer que esas medidas hubiesen sido ineficaces; se habían logrado resultados y se podían esperar más.

1081. Su Gobierno se oponía al uso de la fuerza y continuaría poniendo su confianza en las negociaciones; esa actitud derivaba de su adhesión a la línea de conducta establecida en la resolución del Consejo de Seguridad. No compartía las opiniones expresadas en el proyecto de resolución relativas al probable resultado de las conversaciones que se realizaban entre el Gobierno del Reino Unido y el régimen de Smith. No se podían prejuzgar esas conversaciones y se las debería apoyar, por lo menos, hasta que sus resultados fuesen evidentes.

1082. Su Gobierno compartía la opinión del representante de Venezuela de que el Comité Especial no debía usurpar las funciones del Consejo de Seguridad; si se aprobara el proyecto de resolución se haría pre-

cisamente eso y, por lo tanto, debería votar en contra del proyecto.

1083. El representante de Polonia opinó que la palabra "Reafirmando" en el segundo párrafo del proyecto de resolución revisado debía ser sustituida por la palabra "Recordando".

1084. El representante de Etiopía manifestó que los patrocinadores aceptaban ese cambio.

1085. El representante de los Estados Unidos de América, al explicar su voto, después de celebrada la votación, declaró que, como la resolución no tenía mayor diferencia con la resolución rechazada la semana anterior por el Consejo de Seguridad, su delegación, que se había abstenido de votar en esa oportunidad, también se había abstenido de votar sobre la presente resolución.

1086. Sin querer por ello restar gravedad a la situación existente en Rhodesia del Sur, su Gobierno no creía que se hubiesen agotado todos los medios pacíficos para resolver el problema. Su propia delegación respetaba los puntos de vista de los demás, pero lamentaba que algunos oradores hubiesen adoptado a veces en el debate una tendencia a juzgar las posiciones de las otras delegaciones en forma dogmática y que honradas diferencias de opinión fueran calificadas de colusión.

1087. Su delegación no había pedido que se votaran párrafos por separado; debido a sus reservas sobre la redacción de gran parte de la resolución prefirió no tomar parte en la votación.

1088. El representante de Chile, hablando después de la votación, dijo que el hecho de que su delegación se hubiese abstenido sobre ciertos puntos precisos no significaba absolutamente que Chile se opusiera al conjunto de las medidas preconizadas. Muy por el contrario, había apoyado todas las medidas encaminadas a restablecer el orden en Rhodesia del Sur. Por supuesto, era necesario respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, guardarse de dificultar la acción de otros organismos de las Naciones Unidas. Por ello la delegación chilena se había abstenido de votar sobre el quinto párrafo del preámbulo y sobre los párrafos 3, 7 y 9 de la parte dispositiva.

1089. En lo que se refería al quinto párrafo del preámbulo, el representante de Chile estimaba que era necesario suprimir toda referencia al uso de la fuerza. El párrafo 3 de la parte dispositiva hubiese sido aceptable si en él se hubiese condenado la política de los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica y no a estos Gobiernos en sí. En cuanto al párrafo 7 de la parte dispositiva ya estaba contenido en el párrafo precedente y, por lo tanto, parecía inútil. Por último, hubiese sido necesario suprimir, en el párrafo 9 de la parte dispositiva, el miembro de frase que se refería al uso de la fuerza.

1090. A pesar de las reservas indicadas, la delegación de Chile se había pronunciado a favor del proyecto de resolución en su totalidad, puesto que estaba convencida de que debían restablecerse los derechos del valiente pueblo de Zimbabwe.

1091. El representante de Chile agregó que cuando presentó conjuntamente con la delegación de Venezuela un proyecto de enmienda, su intención había sido ampliar el alcance del proyecto de resolución mencionando a Zambia que, ella también, había sido perjudicada por la existencia del régimen de Smith. En efecto, era ne-

cesario ayudar a Zambia si se quería realmente debilitar al régimen de Smith. Más del 60% de las importaciones de Zambia provenían de Rhodesia del Sur. Era evidente que, al prestar ayuda a esta joven nación, se disminuiría progresivamente y, con el tiempo, se pondría fin al comercio que Zambia desarrollaba con Rhodesia del Sur.

1092. El representante de Venezuela, hablando asimismo después de la votación, dijo que ya había explicado su voto en el curso de la sesión precedente. Simplemente quería aclarar que, a los ojos de su delegación, el párrafo 10 de la parte dispositiva significaba que los Estados Miembros de las Naciones Unidas debían ayudar al pueblo de Zimbabwe, de conformidad con la Carta. Y si Venezuela se había pronunciado a favor del proyecto de resolución, lo había hecho porque el Comité Especial tenía la obligación de actuar para encontrar una solución al grave problema de Rhodesia del Sur.

1093. No obstante, la delegación de Venezuela tenía ciertas reservas en cuanto a la forma dada a este proyecto de resolución.

1094. El representante de Australia, explicando su voto después de la votación, observó que su Gobierno seguía opinando que cabía cifrar esperanzas en las medidas adoptadas por el del Reino Unido, medidas cuya significación todavía no se apreciaba suficientemente. Actos tales como el bloqueo al suministro de petróleo de Beira señalaban la determinación del Gobierno del Reino Unido de lograr su propósito.

1095. Su delegación había votado contra la resolución debido a su sincero convencimiento de que se lograrían mejores resultados con un texto más moderado.

1096. En su 427a. sesión, el Comité Especial celebró una votación nominal sobre el proyecto de resolución conjunto, con las modificaciones oralmente introducidas (A/AC.109/L.294/Rev.2). La votación se desarrolló en la forma siguiente:

a) El quinto párrafo del preámbulo fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra 1 y 4 abstenciones, conforme al detalle siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia.

Abstenciones: Chile, Dinamarca, Italia, Venezuela.

b) El párrafo 3 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 17 votos contra ninguno y 4 abstenciones, en la forma que se indica a continuación:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Dinamarca, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Abstenciones: Australia, Chile, Italia, Venezuela.

c) El párrafo 7 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra 2 y 3 abstenciones, según se indica a continuación:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Po-

lonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Dinamarca.

Abstenciones: Chile, Italia, Venezuela.

d) El párrafo 9 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra 2 y 3 abstenciones, conforme se indica a continuación:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Dinamarca.

Abstenciones: Chile, Italia, Venezuela.

e) El proyecto de resolución en su totalidad, con las modificaciones oralmente introducidas (A/AC.109/L.294/Rev.2), fue aprobado en votación nominal por 18 votos contra 1 y 3 abstenciones, conforme se detalla a continuación:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia.

Abstenciones: Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia.

1097. El texto de la resolución relativa a Rhodesia del Sur (A/AC.109/167), aprobada por el Comité Especial en su 427a. sesión, celebrada el 31 de mayo de 1966, dice así:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo escuchado a los peticionarios durante su examen de la cuestión de Rhodesia del Sur,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Recordando las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad y, en especial, la resolución 217 (1965), de 20 de noviembre de 1965, en la que, entre otras cosas, se encarecía a todos los Estados que hicieran lo posible para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur, incluso establecer el embargo sobre el petróleo y sus productos,

"Recordando además que desde que el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur declaró ilegalmente la independencia, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha declarado, en varias ocasiones, que el régimen de la minoría racista es ilegal,

"Considerando que el Gobierno del Reino Unido, en varios casos, ha adoptado medidas inmediatas, incluso el empleo injusto de la fuerza militar en otras colonias, a fin de restablecer o mantener la llamada constitucionalidad, tal como la define la Potencia administradora,

"*Gravemente preocupado* por las consecuencias que las negociaciones entre los representantes del régimen de la minoría racista y el Gobierno del Reino Unido pudieran acarrear para los derechos de la población africana de Zimbabwe a la libertad y a la independencia,

"*Observando con pesar* que la Potencia administradora no ha intentado en absoluto entablar negociaciones con los dirigentes de los partidos políticos africanos a fin de establecer en Rhodesia del Sur un gobierno que respete las aspiraciones de la población de Zimbabwe,

"1. *Deplora* que el Gobierno del Reino Unido no haya derrocado al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur y establecido en dicha colonia un gobierno democrático en cumplimiento de las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General;

"2. *Expresa* su absoluta desaprobación de las negociaciones en curso entre el Reino Unido y el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur y señala a la atención del Gobierno del Reino Unido las consecuencias perjudiciales que esas negociaciones podrían acarrear para los legítimos derechos de la población africana de Zimbabwe;

"3. *Condena* a los Gobiernos de Portugal y de Sudáfrica por la ayuda que siguen dando al régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur;

"4. *Reafirma* los derechos inalienables de la población de Rhodesia del Sur a la libertad y la independencia conforme a la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reconoce la legitimidad de su lucha por obtener esos derechos;

"5. *Considera* que la situación existente en Rhodesia del Sur sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, como determinó el Consejo de Seguridad en su resolución 221 (1966) de 9 de abril de 1966;

"6. *Señala una vez más a la atención* del Consejo de Seguridad la gravedad de la situación que prevalece en Rhodesia del Sur, a fin de que recomiende las sanciones obligatorias que prevé el Capítulo VII de la Carta y adopte las medidas que procedan para conseguir la aplicación eficaz de sanciones en caso de que algún Estado se niegue a aplicarlas;

"7. *Recomienda* al Consejo de Seguridad que pida al Gobierno del Reino Unido que adopte las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta a fin de impedir, mediante el uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres, que lleguen a Rhodesia del Sur suministros de ningún tipo, inclusive petróleo y sus productos;

"8. *Encarece* al Gobierno del Reino Unido que celebre consultas con los dirigentes de los partidos políticos africanos con el propósito de constituir un gobierno elegido de conformidad con las aspiraciones del pueblo de Zimbabwe, y a fijar para este fin una fecha próxima;

"9. *Encarece* al Gobierno del Reino Unido que adopte todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para abolir el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur y garantizar la inmediata aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"10. *Encarece* a todos los Estados que presten su apoyo moral y material a la población de Zimbabwe a fin de que pueda seguir luchando por conseguir la libertad y la independencia;

"11. *Pide* a los organismos especializados competentes y a las demás organizaciones internacionales de asistencia que presten toda la ayuda posible a los refugiados de Rhodesia del Sur y a las personas que sufren a consecuencia de la opresión que ejerce el régimen de la minoría racista de Rhodesia del Sur;

"12. *Decide* mantener la cuestión de Rhodesia del Sur en su programa y proseguir su examen de modo urgente y continuo."

1098. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad con fecha 14 de junio de 1966³⁵.

APENDICE I

**Proclama radiodifundida por el Sr. Ian Smith
el 11 de noviembre de 1965**

PROCLAMA

Considerando que, en el curso de la vida humana, la historia enseña que a veces un pueblo se ve precisado a disolver los vínculos políticos que lo ligaban a otro pueblo y a asumir, frente a las demás naciones, la igualdad de derechos y la condición jurídica propia a que tiene derecho, y

Considerando que, en tal caso, el respeto a la opinión de la humanidad le exige exponer a las demás naciones los motivos que le impulsaron a asumir la plena responsabilidad de sus propios asuntos,

El Gobierno de Rhodesia declara:

Que es un hecho histórico indiscutible y aceptado que, desde 1923, el Gobierno de Rhodesia ha venido ejerciendo los poderes de autonomía y ha sido responsable del progreso, el desarrollo y el bienestar de su pueblo.

Que el pueblo de Rhodesia, habiendo demostrado su lealtad a la Corona y a aquellos a quienes le unen vínculos de parentesco y amistad en el Reino Unido y en otras partes en el curso de dos guerras mundiales, y habiéndose mostrado dispuesto a verter su sangre y dar todo de sí en aras de lo que estimaron era el interés mutuo de un pueblo amante de la libertad, ve ahora que todo lo que le era caro ha sido sacrificado a la conveniencia del momento.

Que el pueblo de Rhodesia ha sido testigo de un proceso que destruye los preceptos mismos en que se basa la civilización en un país primitivo; ha visto cómo se derrumban en todas partes los principios de la democracia occidental y del gobierno responsable y las normas morales; y, pese a ello, se ha mantenido firme.

Que el pueblo de Rhodesia apoya decididamente la petición de su Gobierno de que se le conceda la independencia soberana, y ha sido testigo de que el Gobierno del Reino Unido se ha negado invariablemente a acceder a sus instancias.

Que el Gobierno del Reino Unido ha demostrado de este modo que no está dispuesto a conceder la independencia soberana a Rhodesia en condiciones aceptables al pueblo de Rhodesia, con lo cual persiste en mantener una jurisdicción injustificada sobre Rhodesia, obstruyendo la aplicación de leyes y de tratados con otros Estados en las relaciones con otras naciones, y negándose a sancionar leyes necesarias para el bien público, todo lo cual redundará en perjuicio de la paz, la prosperidad y el buen gobierno futuros de Rhodesia.

Que el Gobierno de Rhodesia ha celebrado negociaciones pacientemente y de buena fe durante mucho tiempo con el Go-

³⁵ *Ibid.*, documento S/7371.

bierno del Reino Unido sobre la eliminación de las limitaciones restantes que se le habían impuesto y sobre la concesión de la independencia soberana.

Que, convencido de que la dilación y la demora afectan y perjudican la vida misma de la nación, el Gobierno de Rhodesia considera indispensable que Rhodesia obtenga sin demora la independencia soberana, lo que es justo fuera de toda duda;

El Gobierno de Rhodesia, postrado humildemente ante Dios Todopoderoso, que rige los destinos de las naciones, consciente de que el pueblo de Rhodesia ha mostrado siempre lealtad y devoción invariables a Su Majestad la Reina y rogando fervientemente porque no se pongan trabas al pueblo de Rhodesia en su determinación de continuar ejerciendo su derecho innegable a demostrar la misma lealtad y devoción en la búsqueda del fomento del bien común, para que la dignidad y la libertad de todos queden aseguradas, por la presente proclama, aprobamos, promulgamos y damos al pueblo de Rhodesia la Constitución que acompaña a esta proclama.

¡Dios salve a la Reina!

APENDICE II

Southern Rhodesia Act 1965 (capítulo 76)

LEY POR LA CUAL SE ADOPTAN NUEVAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON RHODESIA DEL SUR (16 DE NOVIEMBRE DE 1965)

Su Majestad la Reina, con el debido asesoramiento y asentimiento de los Lores espirituales y temporales y de la Cámara de los Comunes, en el presente Parlamento debidamente convocado y por autoridad del mismo, dispone lo siguiente:

1. Por la presente ley se declara que Rhodesia del Sur continúa siendo parte integrante de los dominios de Su Majestad, y que el Gobierno y el Parlamento del Reino Unido siguen teniendo responsabilidad y jurisdicción sobre Rhodesia del Sur y con respecto a ella.

2. 1) Su Majestad podrá, por real decreto, tomar las disposiciones relativas a Rhodesia del Sur o a las personas o cosas que en alguna forma pertenecieren a Rhodesia del Sur o estuvieren vinculadas a ella, que, a su juicio, sean necesarias o convenientes como consecuencia de cualquier medida anti-constitucional adoptada allí.

2) Sin perjuicio de las disposiciones generales del inciso 1) del presente artículo, un Real Decreto podrá prever disposiciones encaminadas a lo siguiente:

a) Suspender, enmendar, revocar o ampliar cualquiera de las disposiciones de la Constitución de Rhodesia del Sur de 1961;

b) Modificar, prorrogar o suspender la vigencia de cualquier ley o instrumento relacionado con Rhodesia del Sur, o con las personas o cosas que en alguna forma pertenezcan a Rhodesia del Sur o estén vinculadas a ella;

c) Imponer prohibiciones, restricciones u obligaciones a las transacciones relativas a Rhodesia del Sur o a cualquiera de dichas personas o cosas, que, a juicio de Su Majestad, sean necesarias o convenientes según lo expuesto anteriormente; y toda disposición adoptada en virtud de dicho Decreto o con arreglo al mismo podrá aplicarse a lo que se hiciera o se dejare de hacer fuera o dentro del Reino Unido o del país o territorio a que sea aplicable el Decreto.

3) En virtud de un Real Decreto dictado conforme al presente artículo se podrán adoptar o se podrá autorizar a que se adopten las disposiciones contingentes, complementarias y concomitantes que, a juicio de Su Majestad, sean convenientes a los efectos del Decreto, y toda disposición que se adopte en virtud de tal Decreto o con arreglo al mismo podrá entrar en vigor únicamente a partir del 11 de noviembre de 1965.

4) Un Real Decreto dictado en virtud del presente artículo podrá ser revocado o modificado por un Real Decreto ulterior.

5) Un Real Decreto dictado en virtud del presente artículo deberá ser presentado al Parlamento después de haber sido

dictado y expirará a los veintiocho días, contados a partir del día en que se le dictó, a menos que durante ese plazo sea aprobado mediante una resolución por ambas Cámaras del Parlamento.

La expiración de un Decreto en cumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso no afectará la vigencia del Decreto respecto a lo que se haya hecho o se haya dejado de hacer ni la facultad de dictar un nuevo Decreto; y, al calcular el plazo antedicho, no se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual se hubiere disuelto el Parlamento o se hubieren suspendido sus sesiones, o durante el cual ambas Cámaras hubiesen suspendido sus deliberaciones durante más de cuatro días.

3. 1) Con sujeción a las disposiciones del presente artículo enumeradas seguidamente, el artículo 2 de la presente Ley continuará en vigor durante un año a contar de la fecha de promulgación de la presente Ley y expirará entonces a menos que continúe su vigencia conforme a lo previsto en el inciso 2) de la presente sección.

2) Su Majestad podrá, de vez en cuando, en virtud de un Real Decreto, disponer que la sección 2 de la presente Ley continúe en vigor durante un año después de la fecha en que de otro modo habría expirado; pero no se recomendará a Su Majestad en Consejo que dicte un Decreto en virtud del presente inciso a menos que previamente se hubiere presentado al Parlamento un borrador del Decreto y que lo hubieren aprobado ambas Cámaras del Parlamento mediante una resolución.

3) La expiración del artículo 2 de la presente Ley no afectará:

a) La vigencia del artículo respecto de lo que se haya hecho o se haya dejado de hacer; ni

b) La Constitución de Rhodesia del Sur de 1961 tal como regía inmediatamente antes de la expiración de dicho artículo.

4. 1) La presente Ley podrá citarse con el título de *Southern Rhodesia Act 1965*.

2) Las disposiciones de la presente Ley se extienden a Rhodesia del Sur, las Islas Normandas, la Isla de Man, toda colonia o protectorado conforme a la significación de la *British Nationality Act 1948*, y (en la medida en que Su Majestad ejerza allí jurisdicción) a cualquier país o territorio extranjero en que Su Majestad tenga de momento jurisdicción, pero ningún Real Decreto dictado en virtud del artículo 2 de la presente Ley tendrá vigor en un lugar distinto del Reino Unido o de Rhodesia del Sur como parte de la legislación de ese lugar, excepto en la medida en que se refiera a los barcos o aeronaves a que se aplica el presente artículo, o afecte la vigencia de cualquier ley del Parlamento que tenga efectividad en ese lugar, con o sin modificaciones, como parte de su legislación, o de cualquier instrumento en vigor conforme a cualquier ley de esa índole.

3) El presente artículo se aplica a los barcos británicos matriculados en el Reino Unido o en cualquier otro país o lugar a que se extienda la presente Ley, y a las aeronaves matriculadas en las mismas condiciones.

APENDICE III

Decreto de 1965 relativo a la Constitución de Rhodesia del Sur (*Southern Rhodesia (Constitution) Order, 1965*)

Dictado el 16 de noviembre de 1965

Presentado al Parlamento el 17 de noviembre de 1965

Fechas de entrada en vigor:

artículos 2 y 3: 16 de noviembre de 1965

Demás artículos: 18 de noviembre de 1965

*Dictado en la Corte (Palacio de Buckingham),
el día 16 de noviembre de 1965*

Presente: Su Majestad la Reina en Consejo

Su Majestad, en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 2 de la *Southern Rhodesia Act 1965* a) y de todos

los demás poderes que la habilitan en tal sentido, por recomendación y asesoramiento de su Consejo Privado decreta lo siguiente:

1. 1) El presente Decreto podrá citarse con el título de *Southern Rhodesia Constitution Order 1965* y, con excepción de lo previsto en los artículos 2 (2) y 3 (5) del presente Decreto, entrará en vigor el 18 de noviembre de 1965.

2) Salvo en los casos en que el contexto exija otra cosa, las expresiones empleadas en el presente Decreto tendrán el mismo significado que tienen en la Constitución de Rhodesia del Sur de 1961 b) (denominada en lo sucesivo "la Constitución"), y las disposiciones de los artículos 116 y 117 de la Constitución (sin incluir el inciso 8) del artículo 117) se aplicarán para interpretar el presente Decreto tal como se aplican para interpretar la Constitución.

3) Toda referencia en el presente Decreto a una ley promulgada antes de la entrada en vigor del presente Decreto se interpretará, a menos que el contexto exija otra cosa, como una referencia a esa ley tal como había entrado en vigor inmediatamente antes de la vigencia del presente Decreto.

4) Con sujeción a las disposiciones precedentes de este artículo, la *Interpretation Act 1889* c), con las adaptaciones necesarias, se aplicará para interpretar el presente Decreto y todo instrumento hecho conforme al mismo y que de otro modo se relacione con el presente Decreto, así como todo otro instrumento que sea aplicable para interpretar las leyes del Parlamento y se relacione con ellas.

2. 1) Por el presente Decreto se declara, para evitar cualquier equívoco, que es nulo y sin efecto todo instrumento hecho o todo otro acto cometido para la supuesta promulgación de cualquier Constitución de Rhodesia del Sur que no haya sido autorizada por la Ley del Parlamento.

2) El presente artículo entrará en vigor inmediatamente y después se considerará que ha tenido efectividad a partir del 11 de noviembre de 1965.

3. 1) Mientras el presente artículo esté en vigor:

a) El cuerpo legislativo de Rhodesia del Sur no podrá aprobar ninguna ley, ni la Asamblea Legislativa podrá entender en ningún asunto, ni ninguna persona o autoridad podrá adoptar medida alguna para constituir o reconstituir la Asamblea Legislativa ni ninguna medida que de otro modo se relacione con esa finalidad o para elegir miembro de la misma a alguna persona; y los capítulos II y III de la Constitución tendrán efectividad con sujeción a las disposiciones precedentes de este párrafo;

b) Un Secretario de Estado podrá, por orden de su puño y letra, suspender en cualquier momento las sesiones de la Asamblea Legislativa; y

c) Su Majestad en Consejo podrá dictar leyes encaminadas a preservar la paz, el orden y el buen Gobierno de Rhodesia del Sur, incluso leyes que tengan vigencia extraterritorial.

2) Los Reales Decretos dictados conforme a lo previsto en el apartado c) del inciso 1) de este artículo podrán conferir poderes (incluso el poder de legislar), e imponer deberes a personas y autoridades tanto dentro como fuera de Rhodesia del Sur.

3) Las referencias hechas en la Constitución o en una ley cualquiera vigente en Rhodesia del Sur a una Ley de la Legislatura de Rhodesia del Sur o a una disposición de dicha Legislatura se interpretarán en el sentido de que incluyen referencias a un Real Decreto dictado en virtud del apartado c) del inciso 1) del presente artículo.

4) Los Reales Decretos dictados en virtud del apartado c) del inciso 1) del presente artículo serán, a los efectos de la

Statutory Instruments Act 1946 a) instrumentos legales en el sentido de dicha Ley y deberán ser presentados al Parlamento después de habérselos dictado.

5) El presente artículo entrará en vigor inmediatamente y después se considerará que ha tenido efectividad a partir del 11 de noviembre de 1965.

4. 1) Mientras el presente artículo esté en vigor:

a) La autoridad ejecutiva de Rhodesia del Sur podrá ser ejercida por un Secretario de Estado en nombre de Su Majestad;

b) Los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Constitución no tendrán efectividad;

c) Con sujeción a las disposiciones de cualquier Real Decreto dictado en virtud del apartado c) del inciso 1) del artículo 3 del presente Decreto y de cualquier instrucción que Su Majestad dé al Gobernador por conducto de un Secretario de Estado, el Gobernador deberá ejercer, según su buen criterio, cualquier función que, de no haberse dictado el presente Decreto, la Constitución le habría exigido que ejerciese con el asesoramiento del Consejo del Gobernador o de cualquier Ministro;

d) Un Secretario de Estado podrá ejercer cualquier función que la Constitución o una ley cualquiera vigente en Rhodesia del Sur haya confiado a un Ministro, a un Ministro Adjunto o a un Secretario Parlamentario; y

e) Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Decreto, un Secretario de Estado podrá ejercer cualquier función que la Constitución o una ley cualquiera vigente en Rhodesia del Sur haya confiado a cualquier oficial o autoridad del Gobierno de Rhodesia del Sur (siempre que no se trate de un tribunal) o (independientemente de que ejerza o no esa función personalmente) podrá prohibir o restringir el ejercicio de tal función por parte de dicho oficial o autoridad.

2) En los casos en que, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados d) o e) del inciso 1) del presente artículo, un Secretario de Estado ejerza cualquier función que la Constitución o una ley cualquiera vigente en Rhodesia del Sur haya confiado a un Ministro, un Ministro Adjunto, un Secretario Parlamentario, un oficial o una autoridad cualquiera del Gobierno de Rhodesia del Sur, quedará exento de la obligación que se le hubiere impuesto a dicho Ministro, Ministro Adjunto, Secretario Parlamentario, oficial o autoridad, de consultar con una persona o autoridad cualquiera o bien de solicitar el asesoramiento previo de dicha persona o autoridad de actuar conforme a dicho asesoramiento.

3) Pese a lo dispuesto en cualquier otra ley, toda función que en virtud del presente artículo haya sido confiada a un Secretario de Estado podrá ser ejercida por éste mediante una orden de su puño y letra o en cualquier otra forma que estime apropiada.

4) Las referencias hechas en el presente artículo a un oficial del Gobierno de Rhodesia del Sur se interpretarán en el sentido de que incluyen al Gobernador.

5. Mientras dure la vigencia del presente artículo, las órdenes de pago con cargo al Fondo Consolidado de Ingresos sólo podrán expedirse en virtud de una orden dada por un Secretario de Estado, o por el Gobernador en cumplimiento de instrucciones de Su Majestad impartidas por intermedio de un Secretario de Estado, y dirigida a un oficial del Tesoro del Gobierno de Rhodesia del Sur.

6. A los efectos de evitar todo equívoco, se declara por el presente Decreto que toda ley aprobada, todo asunto tramitado, toda medida adoptada o toda función ejercida en violación de cualquier prohibición o restricción impuesta por el presente Decreto, o en virtud del mismo, es nulo y sin efecto.

PARTE II*

H. ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INTERESES EXTRANJEROS, ECONÓMICOS Y DE OTRA ÍNDOLE, EN RHODESIA DEL SUR, ASÍ COMO DE SU MODO DE FUNCIONAMIENTO

Introducción

1099. En su 328a. sesión, celebrada el 22 de abril de 1965, el Comité Especial aprobó una resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur (A/6000/Rev.1, cap. III, párr. 292). En el párrafo 9 de la parte dispositiva de esa resolución el Comité Especial decidió "estudiar, en cooperación con el Secretario General y los organismos especializados de las Naciones Unidas, las consecuencias de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur, así como su modo de funcionamiento, a fin de determinar su influencia económica y política".

1100. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, el Comité Especial manifestó que esperaba presentar un informe sobre este asunto a la Asamblea durante el año 1966 (*ibid.*, cap. I, párr. 61).

1101. En su 409a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1966, el Comité Especial decidió, sin objeciones, remitir al Subcomité I, para examen, el tema relativo a las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur, y forma en que operan. El 14 de septiembre de 1966 el Subcomité I aprobó un informe sobre esta cuestión, que figura en forma de anexo al presente documento.

1102. En su 469a. sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité I.

Examen por el Comité Especial del informe del Subcomité I

1103. En la 469a. sesión del Comité Especial el representante de Siria, Relator del Subcomité I, al presentar el informe del Subcomité (véase el anexo) declaró que después de analizar las consecuencias de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole en Rhodesia del Sur, y la forma en que operan, el Subcomité había llegado a la conclusión, entre otras cosas, de que los intereses extranjeros e intereses conexos desempeñaban un papel decisivo en la vida económica de Rhodesia del Sur y de que las empresas extranjeras que operaban en dicho país se hallaban estrechamente vinculadas a los intereses internacionales de carácter económico y financiero de otras zonas del África meridional. Al igual que esos intereses, dichas empresas habían contribuido directa e indirectamente a negar a los africanos los medios de participar en forma efectiva en la vida económica y de disfrutar de los recursos del país. Expresó la esperanza de que el informe fuera aprobado por unanimidad.

1104. El representante de Australia dijo que en general no podía apoyar el informe, porque no estaba de acuerdo con muchos de sus aspectos y se oponía totalmente a algunos de ellos, particularmente, por ejemplo, el párrafo 102 (véase el anexo). Sin embargo, al hacer esa declaración deseaba que no se interpretase

erróneamente la actitud de su país en relación con la situación de Rhodesia del Sur.

1105. Para aclarar la posición de su delegación sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, recordó que, en la 402a. sesión del Comité Especial, el representante de Australia dijo que las sanciones económicas de su Gobierno contra Rhodesia del Sur no eran meras declaraciones de principio por no haber vínculos económicos, sino que significaban una considerable suspensión efectiva de relaciones comerciales, con los sacrificios económicos consiguientes. Su país no sólo había actuado rápidamente, sino que había sido uno de los primeros del mundo que había adoptado medidas recurriendo de hecho a los procedimientos parlamentarios (generalmente largos y difíciles), con tal rapidez que esos procedimientos habían quedado concluidos el 16 de noviembre de 1965, es decir, tan sólo unos días después de efectuarse la declaración general de independencia. Además, su país apoyaba la resolución del Consejo de Seguridad de 20 de noviembre de 1965. Enumeró las medidas sustantivas que se habían tomado y recordó que el Primer Ministro de Australia había declarado que su Gobierno consideraba ilegal la declaración unilateral de independencia y no reconocería diplomáticamente al nuevo régimen.

1106. El representante del Reino Unido manifestó que la posición de su Gobierno sobre la situación política en Rhodesia desde la declaración ilícita de independencia, y sobre la cuestión de las sanciones económicas había sido expresada con toda claridad ante muchos órganos de las Naciones Unidas, incluso el Consejo de Seguridad. Rechazó, en particular, la recomendación contenida en el inciso a) del párrafo 102 del informe (véase el anexo). Reservó la posición de su delegación sobre estos aspectos del informe para el momento en que se discutieran estos asuntos en el actual período de sesiones de la Asamblea General.

1107. Respecto a la cuestión más general de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole en el África meridional, declaró que la opinión de la delegación del Reino Unido era bien conocida.

1108. Añadió que si el informe quedaba aprobado por consenso, tendría que reservar la posición de su Gobierno y pedir que tal reserva constara en el acta de la sesión.

1109. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que su delegación se oponía a la aprobación del informe, cuyas conclusiones y recomendaciones carecían de fundamento y no ayudarían en nada a derribar al régimen ilícito de Ian Smith. Opinaba que el Comité Especial debería dedicarse a buscar una solución pacífica al problema de lograr el gobierno de la mayoría en Rhodesia del Sur.

1110. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que, en su calidad de miembro del Subcomité, su delegación había apoyado todas las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe, el cual no tenía por objeto derribar al régimen de Smith sino hacer público el hecho de que existían monopolios extranjeros que explotaban en forma implacable los recursos humanos y naturales de Rhodesia del Sur. El estudio del Subcomité había mostrado que la mayoría de los capitales extranjeros provenían de Europa occidental y de los Estados Unidos, y que los monopolios extranjeros eran parte integrante de una red oligárquica cuyo propósito era explotar los enormes recursos

* Publicada anteriormente con la signatura A/6300/Add.1 (parte II).

del África meridional. La responsabilidad por tal situación recaía en el Reino Unido, la Potencia administradora, que había permitido que se promulgasen medidas legislativas que habían dejado el campo abierto para la explotación por monopolios financieros extranjeros. Como había indicado el representante de la República Unida de Tanzania ante el Subcomité, el colonialismo había surgido de la acumulación de capital en los países industrializados de Europa, junto con la necesidad de contar con nuevas fuentes de materias primas y con nuevos mercados. Por lo tanto la colonización de África obedecía a los intereses económicos.

1111. El Subcomité había tenido en cuenta tales hechos al formular sus recomendaciones, las cuales se aplicaban a todos los países coloniales.

1112. El representante de Italia dijo que el Subcomité se había excedido en sus atribuciones al emitir juicios políticos. Su delegación compartía las reservas expresadas por la delegación danesa, que figuraban en el párrafo 103 del informe del Subcomité (véase el anexo). En particular, su delegación no creía que el inciso *a*) del párrafo 102, en el que se condenaba la política colonial del Gobierno del Reino Unido, fuera oportuna; esa recomendación trataba de condensar demasiada historia, no encajaba en el contexto general y no respondía a ninguna finalidad útil. Aunque el orador estaba de acuerdo en que los factores económicos desempeñan una importante función en las actividades humanas, no podía suscribir la opinión ni las teorías implícitas en el informe, en general, de que los llamados intereses económicos y financieros de los monopolios internacionales y de todas las fuerzas de la reacción fueran el único factor o el factor decisivo de los acontecimientos políticos de Rhodesia del Sur. Su delegación también tenía grandes reservas con respecto a la recomendación que se hacía en el inciso *f*) del párrafo 102, en el que se hacía referencia al África Sudoccidental, a los Territorios bajo administración portuguesa y a otros territorios coloniales. Tal recomendación quedaba fuera del alcance del informe y desviaría la atención del problema esencial, que era de carácter político. Sin embargo, su delegación no se opondría a que se aprobase el informe.

1113. El representante de la India felicitó a los miembros del Subcomité I por el completo estudio que habían llevado a cabo. En el informe se describían claramente los complicados círculos financieros que operaban en la zona y que explotaban a la población autóctona y sus recursos. Bastaba una mirada al informe y a sus apéndices para explicar la resistencia de algunos a abandonar los intereses económicos que tenían en el Territorio. La delegación de la India apoyaba el informe con sus conclusiones y recomendaciones. Añadió que, como había dicho el representante de Italia, era verdad que los Territorios bajo administración portuguesa y el África Sudoccidental no eran parte, estrictamente hablando, del tema del informe, pero en el programa del Subcomité I figuraba también un estudio sobre los intereses económicos extranjeros en esos territorios, y el orador tenía entendido que la recomendación formulada en el inciso *f*) del párrafo 102 del informe no se repetiría en los informes del Subcomité sobre los demás territorios.

1114. El representante de Bulgaria, refiriéndose a las conclusiones contenidas en los párrafos 67 y 68 del informe del Subcomité, declaró que era importante precisar el papel desempeñado por los intereses econó-

micos extranjeros, no sólo en la evolución de la situación en Rhodesia del Sur con anterioridad a la usurpación del poder por la minoría blanca, sino también, en particular, en relación con la ayuda prestada por dichos intereses a la minoría racista. El informe del Subcomité demostraba que, efectivamente, esos intereses habían desempeñado un papel en tal sentido. Nada habría de nuevo en que el Comité Especial condenase la política del Reino Unido en Rhodesia del Sur, según se recomendaba en el inciso *a*) del párrafo 102, y también sería pertinente condenar las actividades de los intereses económicos extranjeros en Rhodesia del Sur, que apoyaban al régimen minoritario en su desafío a la opinión pública mundial (inciso *d*) del párrafo 102). La recomendación contenida en el inciso *e*) del párrafo 102 era lógica; el orador estaba de acuerdo en que el Comité Especial debería instar a las Potencias interesadas a que tomaran las medidas necesarias para asegurarse de que sus nacionales no impidieran la consecución de la independencia por el pueblo de Rhodesia del Sur. Como el Comité Especial ya había debatido, por conducto del Subcomité I, el papel desempeñado por los intereses económicos extranjeros en el África Sudoccidental y en los Territorios bajo administración portuguesa, la referencia a dichos territorios en el inciso *f*) del párrafo 102 tenía justificación. Añadió que su delegación apoyaba las recomendaciones del Subcomité en su conjunto y, de manera especial, la recomendación que constaba en el inciso *f*) del párrafo 102.

1115. El representante del Uruguay manifestó que su delegación consideraba que el informe del Subcomité era una valiosa contribución al estudio del problema y una útil compilación de materiales que permitiría a los miembros formarse más fácilmente una opinión sobre el asunto. Su delegación tenía algunas reservas de carácter general, semejantes a las que había expresado el representante de Italia. Aceptaba todas las recomendaciones contenidas en el párrafo 102 del informe salvo la del inciso *a*), sobre la cual tenía claras reservas. No podía apoyar una condenación explícita de la política colonial del Reino Unido en la que se declarase que esa política "ha dado como resultado la instauración del actual régimen racista minoritario...".

1116. El representante de Siria declaró, en ejercicio del derecho de respuesta, que, como el representante de los Estados Unidos había dicho que debería encontrarse una solución pacífica al problema, él se preguntaba si los Estados Unidos podrían contribuir a esa solución, haciendo presión sobre las empresas extranjeras que actuaban en Rhodesia del Sur para que trataran a los africanos en pie de igualdad con los europeos, y para que reconocieran los legítimos derechos de los africanos.

1117. El representante de Dinamarca señaló a la atención del Comité Especial el párrafo 103, en el que constaban las observaciones formuladas por su delegación en la 31a. sesión del Subcomité I en el sentido de que no podía apoyar las recomendaciones contenidas en los incisos *a*) y *f*) del párrafo 102 del informe del Subcomité. Su delegación no había cambiado de posición pero, en la inteligencia de que quedaría constancia de sus reservas, no se opondría a la aprobación del informe.

1118. El representante de Venezuela dijo que su delegación aceptaba, en sus líneas generales, las recomendaciones del Subcomité pero tenía graves reservas acerca de la manera como estaba redactado el inciso *a*) del párrafo 102.

1119. El representante de Chile manifestó que en el informe del Subcomité se subrayaban los factores económicos que entorpecían la consecución de la independencia y la libre determinación del pueblo del Territorio. El orador estaba en favor de mantener la recomendación formulada en el inciso f) del párrafo 102. Nada impedía al Comité Especial mencionar en dicho contexto al África Sudoccidental, a los Territorios bajo administración portuguesa y a otros territorios coloniales. La delegación de Chile aceptaba las recomendaciones contenidas en los incisos b), c) y d) del párrafo 102 y apoyaba las conclusiones del informe.

1120. El representante de Malí señaló que su delegación apoyaba plenamente el informe. Estimaba que las recomendaciones eran el mínimo aceptable para prestar asistencia al pueblo de Rhodesia del Sur, que sufría bajo un régimen de agresión racista apoyado por monopolios extranjeros. El informe mostraba claramente que el Gobierno de Ian Smith protegía a dichos monopolios.

Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité I

1121. En la 469a. sesión del Comité Especial el representante de la India propuso que en el inciso e) del párrafo 102 del informe del Subcomité I (véase el anexo) se reemplazaran las palabras "Haga un llamamiento" con la palabra "Inste".

1122. La propuesta del representante de la India fue apoyada por el representante de Siria.

1123. En la misma sesión el representante de la Costa de Marfil sugirió que en el inciso a) del párrafo 102 del informe del Subcomité I se reemplazara la palabra "Condene" con la palabra "Lamente".

1124. La sugerencia del representante de la Costa de Marfil fue apoyada por el representante de Madagascar.

1125. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que, si bien su delegación lamentaba la política colonial del Gobierno del Reino Unido en Rhodesia del Sur, también la condenaba, al igual que todos los pueblos progresistas, y estaba a favor de mantener la palabra "Condene" en el inciso a) del párrafo 102.

1126. El representante de Chile declaró que apoyaba la propuesta del representante de la India de reemplazar las palabras "Haga un llamamiento" con la palabra "Inste" en el inciso e) del párrafo 102. Añadió que su delegación estaba dispuesta a aceptar la opinión de la mayoría con respecto a la forma del inciso a) del párrafo 102 pero preferiría que se emplease la palabra "Lamente". Expresó, a título provisional, una reserva acerca del fondo del inciso a) del párrafo 102 y se reservó el derecho de formular en forma definitiva el punto de vista de su delegación después de consultar con su Gobierno.

1127. El representante del Uruguay indicó que la recomendación hecha en el inciso a) del párrafo 102 era implícita y evidente, pero que las reservas de su delegación sobre ella se basaban en la opinión de que tal recomendación no correspondía a la tarea del Comité Especial según se anunciaba en la resolución aprobada en su 328a. sesión. A su juicio hubiera sido preferible que las recomendaciones comenzaran con una acerca del tema tratado en el informe. Sin embargo,

si se acordase emplear la palabra "Lamente", en lugar de la palabra "Condene", la delegación del Uruguay no se opondría a que se aprobase la recomendación.

1128. El representante de Venezuela manifestó que si se llegase a un acuerdo sobre el uso de la palabra "Lamente" en el inciso a) del párrafo 102, su delegación retiraría su reserva.

1129. El representante de Dinamarca declaró que, aún con la enmienda propuesta, su delegación mantendría sus reservas sobre el inciso a) del párrafo 102.

1130. El representante de la República Unida de Tanzania y el representante de la India indicaron que, en pro de la unanimidad, aceptarían que se empleara la palabra "Lamente" en el inciso a) del párrafo 102.

1131. El representante de Malí opinó que debería condenarse la política del Gobierno del Reino Unido en Rhodesia del Sur, pero añadió que su delegación, con ánimo de avenencia, aceptaría la palabra "Lamente" en el inciso a) del párrafo 102.

1132. En la misma sesión, el Comité Especial decidió aprobar las enmiendas propuestas verbalmente por los representantes de la India y de la Costa de Marfil respecto de las recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité I, sin perjuicio de las reservas expresadas por algunos miembros sobre el informe en su conjunto.

1133. El Comité Especial aprobó luego el informe del Subcomité I (véase el anexo) y apoyó sus conclusiones y recomendaciones, con las enmiendas introducidas, en la inteligencia de que se harían constar las reservas expresadas por ciertos miembros.

1134. A continuación figuran las recomendaciones aprobadas con las enmiendas introducidas por el Comité Especial en su 469a. sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966:

El Comité Especial recomienda a la Asamblea General que:

a) Deplore la política colonial del Gobierno del Reino Unido que ha dado como resultado la instauración del actual régimen racista minoritario basado en la explotación colonial de los recursos naturales y humanos del Territorio en detrimento de los derechos e intereses de la población indígena de Rhodesia del Sur;

b) Condene una vez más la declaración ilegal de independencia hecha por los colonos blancos de Rhodesia del Sur, que representan los intereses económicos y financieros de los monopolios internacionales, así como a todas las fuerzas reaccionarias;

c) Reafirme los derechos de la población indígena del Territorio a la libre determinación y a la auténtica independencia, y la legitimidad de su lucha por lograr la liberación tanto económica como política;

d) Condene enérgicamente las actividades y los métodos de operación en Rhodesia del Sur de los intereses extranjeros económicos y de otra índole, que apoyan al régimen racista minoritario en su represión de la población africana del Territorio y en su desafío a la opinión pública mundial;

e) Inste a las Potencias interesadas a que ejerzan su influencia sobre aquellos de sus nacionales que poseen o dirigen empresas en Rhodesia del Sur con objeto de que pongan fin a sus actividades, que impiden la consecución de la independencia del pueblo de Rhodesia del Sur, y de que se abstengan de apoyar en

forma alguna las políticas coloniales que constituyen un crimen de lesa humanidad;

f) Incluya con carácter de urgencia el siguiente tema en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea:

“Actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, África Sudoccidental, los Territorios bajo administración portuguesa y otros territorios coloniales”;

g) Pida al Secretario General que dé la mayor publicidad posible al contenido de este informe y a las decisiones de las Naciones Unidas sobre esta cuestión.

ANEXO

[A/AC.109/L.332]

Informe del Subcomité I

Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en Rhodesia del Sur, y forma en que operan

Relator: Sr. Rafic JOUÉJATI (Siria)

INDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-5
EXAMEN POR EL SUBCOMITÉ	6-103
A. Declaraciones de los miembros	6-65
B. Conclusiones	66-101
C. Recomendaciones	102
D. Aprobación del informe	103

Apéndices

	Página
I. LA ECONOMÍA DE RHODESIA DEL SUR, CON PARTICULAR REFERENCIA A LOS INTERESES EXTRANJEROS	231
II. ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES ECONÓMICAS CONTRA RHODESIA DEL SUR	283

INTRODUCCIÓN

1. En su 328a. sesión, celebrada el 22 de abril de 1965, el Comité Especial aprobó una resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur (A/6000/Rev.1, cap. III, párr. 292). En el párrafo 9 de la parte dispositiva de esta resolución, el Comité Especial resolvió “estudiar, en cooperación con el Secretario General y los organismos de las Naciones Unidas, las consecuencias de las actividades de intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en Rhodesia del Sur, así como su modo de funcionamiento, a fin de determinar su influencia económica y política”.

2. Para ayudar al Comité Especial a estudiar este problema, la Secretaría proporcionó a los miembros del mismo, el 21 de diciembre de 1965, un documento de trabajo sobre la economía de Rhodesia del Sur, con especial referencia a los intereses extranjeros (véase apéndice I).

3. En su 409a. sesión, el 26 de abril de 1966, el Comité Especial decidió sin objeciones someter al Subcomité I* para su examen el tema relativo a las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en Rhodesia del Sur, y forma en que operan.

*El Subcomité se compone de los siguientes miembros: República Unida de Tanzania (Presidente), Dinamarca, Etiopía, Malí, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

4. El Subcomité examinó este tema en sus 24a., 25a., 26a. y 31a. sesiones, celebradas los días 9 y 12 de mayo, 25 de julio, y 14 de septiembre de 1966, respectivamente. El Subcomité tuvo ante sí el mencionado documento de trabajo preparado por la Secretaría.

5. En su 25a. sesión, celebrada el 12 de mayo de 1966, el Presidente del Subcomité, por sugerencia del representante de la Unión Soviética, pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo suplementario sobre la forma en que las actividades de los monopolios extranjeros hacen que las sanciones económicas contra el régimen de Smith resulten ineficaces. En cumplimiento de esta solicitud, la Secretaría proporcionó a los miembros del Subcomité, el 21 de julio de 1966, un nuevo documento de trabajo sobre acontecimientos recientes relativos a las sanciones económicas contra Rhodesia del Sur (véase apéndice II). Este documento de trabajo proporcionó información complementaria de la ya contenida en anteriores documentos de trabajo sobre Rhodesia del Sur, preparados por la Secretaría para uso del Comité Especial (A/AC.109/L.327).

EXAMEN POR EL SUBCOMITÉ

A. Declaraciones de los miembros

6. El representante de la República Unida de Tanzania expresó su agradecimiento a la Secretaría por haber compilado los cuantiosos datos que aparecen en el documento de trabajo, que sería utilísimo al Subcomité.

7. Convenía advertir que el colonialismo, lejos de ser simple aventura, obedecía a la acumulación de capital en las naciones industrializadas de Europa y a la sed de nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados. Eso significaba que la colonización de África había sido promovida por intereses económicos.

8. Para comprender claramente esta cuestión, había que considerar tres factores. Primero, el estudio de las actividades de los monopolios extranjeros en África Sudoccidental y en los territorios bajo administración portuguesa efectuado por el Subcomité había demostrado que las compañías, por más que tuvieran diversos nombres, eran parte integral de una trabazón oligárquica que se proponía explotar los inmensos recursos del sur de África, hecho que volvería seguramente a confirmar el estudio sobre Rhodesia del Sur. El segundo factor era el establecimiento de “tierras de la Corona” y de tierras de blancos, cuyas consecuencias habían sido que se despojara a los africanos y se los privara de sus propias fuentes de producción, y que se entronizara a los pobladores colonialistas como fuerza administrativa “superior” en Zimbabwe. Tercero, la severa dominación de los imperios financieros en el sur de África, y la relación entre sus diversas ramas y sucursales, constituían un obstáculo a la efectividad de las sanciones económicas. Las sanciones que se aplicaran a unas ramas afectarían a las otras; al mismo tiempo, aunque cabría tratar de restringir las actividades de las filiales que operaban en Rhodesia del Sur, las de otros sectores automáticamente las abastecerían de todo lo que necesitasen, en cantidad suficiente.

9. La cuestión de la tierra era fundamental. A través de la usurpación de los derechos de posesión de las tierras, la minoría blanca se había mantenido como instrumento del colonialismo y de los monopolios extranjeros; se habían denegado a los africanos de Zimbabwe sus derechos naturales y se habían sacrificado en el altar de desmedidos beneficios las bases esenciales de la vida africana. Había veinte africanos por europeo y, sin embargo, tal era la distribución de la tierra que había 168 acres por europeo y sólo diez por africano. Además, alrededor del 5% de la tierra que tenían los africanos era completamente improductiva. Por otro lado, las grandes fincas de Rhodesia estaban en manos de compañías, sobre todo de la Lonrho Ltd., propiedad común de intereses financieros británicos y de ciertos colonos. A los colonos europeos se les daban las mejores tierras, las situadas cerca del ferrocarril y de las carreteras importantes. Aunque en su mayoría llegaban a Rhodesia del Sur sin recursos, el Gobierno les daba tierras

y los orientaba para que obtuvieran créditos y capital suficiente para recoger la primera cosecha. La mano de obra africana que empleaban trabajaba por varios meses sin pago y tenía que esperar hasta que se vendiera la cosecha para percibir sus lastimosos salarios. También se empleaba en esas condiciones a niños y menores, de ocho a dieciocho años de edad, práctica que a más de ser moralmente censurable, vulneraba los convenios internacionales. Sometidos a esos trabajos serviles, los niños africanos no podían educarse para progresar personalmente y para el progreso futuro de su país. Como a los trabajadores agrícolas no se les permitía formar sindicatos, no tenían manera de proteger sus intereses. Por eso, las compañías extranjeras dedicadas a ese sector de la economía restringían con empeño los derechos de los trabajadores africanos de Zimbabwe.

10. En Rhodesia del Sur, la agricultura era la principal fuente de actividad económica y de divisas. De ahí que la tierra fuera el bien máspreciado del pueblo y que los africanos de Rhodesia del Sur tuvieran derecho natural a una parte equitativa de la tierra. Pero la parte del león se había dado a los elementos extranjeros de explotación y a sus representantes locales, los colonos racistas. Es lo que había hecho la administración colonial británica por medio de la *Land Apportionment Act*. Ya en 1923, el llamado Consejo Legislativo de Rhodesia del Sur, bajo la dirección del Gobierno del Reino Unido, había promulgado las leyes necesarias, atendiendo a una resolución aprobada por el Congreso de la Unión Agrícola, en que se pedía a la administración colonial que se impidiera a los terratenientes vender tierras "a asiáticos o a autóctonos en medio de una comunidad europea". Esta ley, colmo de la arrogancia, abrió el camino a la explotación de los monopolios financieros extranjeros. Vinieron después otras leyes: la ley por la que se daba fundamento legal a una política de segregación; la ley (*African Affairs Act*) por la que se prohibía que un africano se trasladara de un distrito a otro; y la ley, conforme a la constitución tristemente célebre de 1961, por la que se autorizaba al Gobernador a despojar aún más a los africanos de sus tierras cuando se requiriesen para explotación de minerales, o con fines de defensa, etc.

11. Además de tener el monopolio de las tierras mejores y mejor situadas — de las que sólo cultivaban un 3,5% — los europeos tenían libre acceso a la llamada "Native Purchase Area", en la que podían comprar tierras so pretexto de explotación minera o de ejecutar proyectos que convinieran a los intereses de los "autóctonos". Cabía preguntar adónde iría a parar la explotación y qué futuro aguardaba a los cuatro millones de africanos. Las leyes antes citadas estaban concebidas para relegar a los africanos de Rhodesia del Sur al nivel más bajo de la economía y favorecer a las compañías extranjeras que operaban en el país.

12. El principal producto agrícola de Rhodesia del Sur era el tabaco. Varias compañías, británicas o de origen británico principalmente, desempeñaban un papel principal en la industria, tanto interna como internacional, del tabaco. Desde luego, las enormes utilidades que obtenían esas compañías no iban a la población africana de Zimbabwe, sino a los accionistas británicos. Otro tanto ocurría en las industrias azucarera y textil. Los salarios que se pagaban a los africanos empleados en esas industrias eran muy diferentes de los que cobraban los europeos.

13. Sin embargo, la industria minera era la que presentaba el ejemplo más notable de explotación económica. La British South Africa Company, se estableció para explotar la riqueza mineral de Rhodesia del Sur; no para favorecer a los autóctonos sino para llenar las arcas de sus accionistas, a miles de millas de distancia. Según informaciones periodísticas, en Rhodesia del Sur se habían hallado yacimientos importantes de magnesita, que explotaban la Cullinan Refractories Ltd. y la Vereeniging Brick and Tile, compañías ambas sudafricanas. La industria del hierro en bruto de Rhodesia se hallaba virtualmente bajo el control de la Rhodesian Iron and Steel Corporation (RISCO), gigantesco consorcio de empresas anglo-americanas. Inmediatamente después de anunciarse las sanciones al régimen de Smith, el grupo RISCO tomó medidas para trasladar sus empresas y comerciar por intermedio de la

ISCOR (Iron and Steel Corporation), entidad de propiedad de Sudáfrica. Era evidente que las actividades de ese grupo de compañías extranjeras iban contra los intereses de los africanos de Rhodesia del Sur.

14. Cuando se produjo la expropiación de tierras por europeos, se abusó de la tradicional generosidad de los africanos. El jefe Lubengula, rey de los matabeles, celebró un acuerdo con la British South Africa Company, conforme al cual, a cambio de los derechos de explotación minera, se convenía en pagar determinada renta a los africanos propietarios de la tierra; estos últimos se rebelaron contra la compañía en 1893, porque ésta no cumplió el convenio y, no fueron derrotados hasta 1897, después de que los colonos recibieron refuerzos. Y ese fue el pretexto con que se despojó, a sus legítimos propietarios, de lo que ahora se conocía como Rhodesia del Sur. Desde entonces, la Compañía vendió tierras impunemente a los nuevos colonos. El negocio fue tan lucrativo que la compañía constituyó muchas filiales en el Reino Unido, Rhodesia del Sur, Canadá, etc. Unas dos terceras partes de los directores eran súbditos británicos y residían en el Reino Unido, lo que explicaba que el Gobierno del Reino Unido se negara a someter al régimen rebelde. El monto de lo que cada año salía del país era colosal: solamente en el período 1961-1963 se había exportado por valor de unos 426 millones de libras esterlinas.

15. En 1962, un grupo de expertos estudió los recursos económicos de Rhodesia del Sur y, en particular, la agricultura africana. Según su informe, los europeos asalariados recibieron en 1962, término medio, 1.173 libras esterlinas por persona, pero los africanos sólo 95 libras esterlinas. El alto ingreso de la población europea reflejaba en parte la primitiva falta de aptitudes, conocimientos y capacitación especializados, que sólo podían proporcionar europeos, pero también se debía en parte a ventajas preconcebidas. Los ingresos de los africanos eran más bajos; decía el informe, principalmente porque se restringían oportunidades de que aumentaran su capacidad productiva y se malgastaban las energías de la gran mayoría de la población en trabajos en gran parte no calificados. Esa reflexión, junto con los datos del documento de trabajo, testimoniaban elocuentemente en qué forma implacable se explotaba a los africanos en Rhodesia del Sur.

16. La tierra desempeñaba un papel decisivo en la vida económica de Rhodesia del Sur. Los grandes arriendos de tierras otorgados a intereses financieros extranjeros y a los colonos se mantenían conforme a la *Land Apportionment Act*, de triste fama. El pueblo de Rhodesia del Sur censuraba categóricamente esa ley porque entendía que era parte integral del aparato de coerción que las fuerzas del colonialismo empleaban para negarle la libertad. Los monopolios extranjeros que operaban en Rhodesia del Sur y que seguían explotando los recursos humanos y naturales del país mediante la aplicación de aquella ley, eran obstáculo directo a que los africanos alcanzaran sus legítimas aspiraciones. Los monopolios contribuían e incitaban a la consolidación de la dominación colonial en Africa del Sur por medio de la minoría de los colonos blancos.

17. Cabía sacar las siguientes conclusiones: las compañías extranjeras que operaban en Rhodesia del Sur coadyuvaban directamente a privar a los africanos de los medios básicos de producción, con lo que se les sometía a formas anticuadas de producción y se restringía su desarrollo; tenían una posición que se había obtenido a costa de despojar a los verdaderos hijos de Rhodesia; ampliaban empeñosamente el aparato de coerción del régimen colonial; y, mientras la opinión pública internacional apoyaba aparentemente las sanciones al régimen rebelde, esas compañías extranjeras obraban de acuerdo para socavar cualquier medida de esa índole. Quería decir que había un obstáculo directo, que se oponía a que los africanos lograran su liberación. Por eso el Subcomité tenía que recomendar que los gobiernos cuyos nacionales constituían esas compañías impidieran la prosecución de actividades que se oponían a la libertad y la independencia de los africanos de Rhodesia del Sur.

18. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el estudio anterior del Subcomité sobre

las actividades de los monopolios imperialistas en África Sudoccidental y en los Territorios africanos bajo administración portuguesa había demostrado claramente que los monopolios del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania occidental y otros países, que oprimen con sus tentáculos a todo el sur y el centro del continente africano, eran un serio obstáculo a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Tanto los trabajos del Subcomité como los del propio Comité Especial habían establecido de manera inequívoca que estos mismos monopolios internacionales operaban en los Territorios no autónomos del África meridional, y que habían convertido en dominio privado a esta región del mundo y estaban resueltos a mantenerla como santuario del colonialismo con objeto de seguir obteniendo cuantiosos beneficios.

19. La función decisiva desempeñada por los monopolios internacionales en lo que se refería a la destrucción de las legítimas aspiraciones del pueblo de Zimbabwe a una verdadera independencia, era manifiesta en toda la historia de Rhodesia del Sur, donde el 80% de las inversiones de capital procedían del extranjero. La British South Africa Company, fundada en 1889 por Cecil Rhodes, disfrutó hasta 1923 de poderes ilimitados en el Territorio, incluido el derecho a adquirir y explotar las tierras. Para instalar y mantener a la camarilla de señores de la población autóctona, la British South Africa Company creó fuerzas armadas de policía, de las que aún existían unidades. Esta misma compañía tuvo una importante intervención en la conquista del Territorio por el Reino Unido, el pillaje de Zimbabwe, su colonización por inmigrantes blancos, la incautación de las mejores tierras sin excepción y el establecimiento de la actual estructura social y política de Rhodesia del Sur.

20. Por ser la explotadora máxima del continente africano, la British South Africa Company había mantenido durante largos años estrechas relaciones con la principal compañía del África meridional, la Anglo-American Corporation. Los consejos de administración de las dos sociedades se fusionaron en 1965, y una nueva sociedad, la Charter Consolidated, a través de su filial de Rhodesia, la Anglo-American Corporation (Rhodesia), y de compañías asociadas, poseía importantes participaciones en prácticamente todos los sectores de la economía de Rhodesia, incluidos las industrias mineras y forestales, y la producción de frutos cítricos, tabaco y azúcar. Las inversiones totales de capital de los monopolios británicos había sido estimada en 200 millones de libras esterlinas y en 56 millones de dólares para los de Estados Unidos. La mayor parte de estos capitales estaban invertidos en actividades agrícolas, minas y bienes inmuebles. Las inversiones totales de las compañías sudafricanas habían sido estimadas en 75 millones de libras esterlinas.

21. Los monopolios internacionales ocupaban una posición particularmente destacada en la industria minera, en la cual estaba invertido el 90% de todo el capital privado, en tanto que sólo el 10% lo estaba en las industrias manufactureras, de transformación y agrícolas. La compañía del Reino Unido Turner and Newall, Ltd., que había ganado 12.700.000 libras esterlinas en 1962-1963, controlaba el 63% de la producción de amianto, del cual Rhodesia del Sur era el principal productor del mundo. Las reservas de cromo eran explotadas descaradamente por monopolios extranjeros tales como la London Chrome Company Ltd. y la Vanadium Corporation of America, en tanto que la producción de litio, cobre, oro y carbón estaba controlada casi exclusivamente por la Bikita Minerals (Pvt.) Ltd., la M. T. D. (Mangula) Ltd., sociedades del grupo Lonrho, y la Wankie Colliery Company Ltd., respectivamente. Era un hecho inequívoco que las compañías de propiedad norteamericana estaban adquiriendo una participación cada vez mayor en la explotación de los recursos mineros de Rhodesia.

22. En el campo de la metalurgia ferrosa, que estaba controlada en gran parte por la Charter Consolidated a través de su filial The Rhodesian Iron and Steel Company Ltd. (RISCO), se había producido en fecha reciente un incremento de la penetración del capital japonés, habiéndose otorgado a dos importantes empresas japonesas concesiones para la explotación

de mineral de hierro en la producción de hierro en bruto y para la construcción de un nuevo alto horno para la RISCO. La factoría de montaje de vehículos automotores de Salisbury pertenecía a la Ford Motor Company of Rhodesia, filial de la Ford of Canada. La Rhodesia Bata Shoe Company producía el 90% de todo el calzado de cuero.

23. El predominio de los monopolios extranjeros, que poseían vastas extensiones de terreno en el Territorio, era especialmente marcado en la producción agrícola. El tabaco era cultivado por agricultores europeos y su comercialización corría a cargo de tres grandes empresas controladas por la Imperial Tobaccó, a saber, la Gallaher, la British American Tobacco Ltd. y la Rothmans Tobacco. Entre los monopolios que tenían fuertes inversiones de capital en tabacales figuraba el South African Mutual Insurance Group. La producción de azúcar estaba controlada enteramente por monopolios internacionales a través de las empresas Triangle Ltd. e Hippo Valley Estates Ltd.

24. Estos hechos demostraban palpablemente que la economía de Rhodesia del Sur se encontraba enteramente en manos de intereses económicos extranjeros, situación a la que debía atribuirse en gran parte la transformación del Territorio en una colonia de colonos blancos, así como la división de la economía en dos sectores separados, el europeo y el africano, estando sujeto este último a una despiadada explotación colonial por el primero. El sector europeo, que representaba casi el 90% del ingreso nacional, comprendía las principales compañías extranjeras y las empresas propiedad de la burguesía colona. El dominio de la economía del territorio por los monopolios extranjeros con sus intereses mercenarios había producido hambre, miseria y sufrimientos sin cuento a millones de trabajadores africanos. Fueron obligados a trabajar en empresas industriales y agrícolas de los blancos a cambio de apenas lo estrictamente necesario para subsistir. Los europeos, por su parte, disfrutaban de un alto nivel de vida y de todas las ventajas sociales posibles. Todos sus hijos podían recibir no sólo enseñanza primaria y secundaria, sino también enseñanza superior. En 1965 la asignación de fondos per cápita para enseñanza había sido en el caso de los europeos quince veces superior a la correspondiente a los africanos. Todas estas ventajas constituían la base de los prejuicios raciales y de la ideología del apartheid que habían contaminado a la mayoría de la población europea, en particular a la nacida en el Territorio y a los inmigrantes de Sudáfrica.

25. Los colonos inmigrantes blancos siempre habían encontrado tierra, trabajo, mano de obra barata y una posición de supremacía en Rhodesia del Sur y, habían contado en todo momento con el apoyo político, social y económico de los poderosos monopolios. Por tanto, no era motivo de sorpresa que los colonos blancos, cumpliendo la voluntad de sus amos — los monopolios internacionales — hubieran creado a su vez las condiciones más favorables que permitiesen a esos monopolios continuar efectuando inversiones de capital. Un claro ejemplo de segregación económica lo ofrecía el sector agrícola, dentro del cual correspondía a los europeos, que sólo constituían el 5% de la población, el 45% de las explotaciones agrícolas, el 75,5% de los costos de producción y el 93,9% de la producción total. El ingreso anual medio de los agricultores africanos era de 11 a 14 libras esterlinas, pero muchos africanos vivían en las reservas tribales y no obtenían ingreso alguno.

26. La despiadada explotación de la inmensa mayoría de la población por los monopolios extranjeros y los colonos blancos se vio reforzada aún más con la *Land Apportionment Act*, ley tristemente célebre que había conducido a una situación en la cual el 23% de la población se hallaba enteramente a merced de los monopolios extranjeros y de los propietarios agrícolas europeos, que obtenían enormes beneficios explotándola, y otro 59% se veía obligada a vivir en reservas. De este modo, primero los monopolios, con ayuda de los colonos, y luego éstos con ayuda de aquéllos, desalojaron de la mitad del territorio del país a los habitantes indígenas y se apoderaron de las mejores tierras del país, convirtiendo a millones de africanos en reserva de mano de obra barata. Aunque oficialmente los sindicatos eran tanto para los trabajadores blancos como los

africanos, en la práctica, la mayoría de las organizaciones sindicales estaban segregadas. Los salarios ganados por los africanos eran muy inferiores a los percibidos por los trabajadores blancos, dado que la mayoría de aquéllos estaban empleados en trabajos no calificados, aunque, como indicaba el documento de trabajo, incluso cuando africanos y no africanos ejecutaban la misma tarea, se aplicaban salarios diferentes. La fuerte disparidad entre las ganancias de los africanos y las de los europeos se desprendía aún más claramente de las cifras oficiales, con arreglo a las cuales el ingreso anual medio de 1964 de los europeos era de 1.241 libras esterlinas, y el de los africanos de 121. Los africanos tenían que trabajar y vivir en condiciones espantosas, sin asistencia médica ni servicios de ningún tipo.

27. El sistema de enseñanza de Rhodesia estaba destinado, de una parte, a aumentar el número de africanos con educación primaria suficiente a fin de proporcionar mano de obra a las fábricas y las explotaciones agrícolas, y, de otra, a reducir el número de africanos calificados para ejercer con efectividad funciones de liderazgo político. Las más ligeras protestas contra el régimen de Smith por parte de los africanos fueron cruelmente reprimidas. Miles de africanos estaban privados de libertad, sin proceso judicial y sin que se hubieran presentado acusaciones concretas, por períodos prolongados. Las actividades policíacas obstaculizaban todo intento de manifestar el descontento de la población africana, y todas las actividades de este tipo, en particular dentro de los sindicatos, estaban prohibidas.

28. El propósito de los monopolios de mantener su supremacía en Rhodesia del Sur había sido descrito en el número de *The Economist* de 13 de noviembre de 1965. En el mismo número se exponía un programa de medidas diplomáticas, políticas y económicas para mantener el control colonial sobre este Territorio. El Gobierno del Reino Unido había adoptado de hecho medidas similares a las propugnadas en *The Economist*, pero el programa de sanciones no había surtido apenas efecto sobre las sociedades del Reino Unido que operaban en Rhodesia del Sur. Estas sociedades habían tenido tiempo de prepararse para las sanciones e incluso habían aumentado sus beneficios. Los monopolios internacionales lograban no sólo evadir sino también anular la efectividad de las sanciones económicas. Los monopolios del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y otros países infringían la prohibición que pesaba sobre las ventas de tabaco de Rhodesia y evadían el embargo del petróleo. Las compañías sudafricanas y de Rhodesia y otras compañías extranjeras aunaban sus esfuerzos en una compleja operación destinada a mantener a Rhodesia del Sur abastecida de petróleo. El Primer Ministro del Reino Unido había mencionado la dificultad de obligar a los monopolios petroleros a participar en el embargo del petróleo, pero, en cambio, había omitido indicar que en Sudáfrica se producían productos petroleros en factorías propiedad de compañías del Reino Unido y Estados Unidos. Era significativo que el 52% de las acciones de la British Petroleum fueran de propiedad británica.

29. Varios políticos del Reino Unido mantenían estrechos vínculos con las compañías internacionales. Por ejemplo, catorce diputados conservadores tenían capital invertido en Rhodesia del Sur. El Sr. William Brown era director de una oficina de la Caltex, monopolio norteamericano. Un diputado laborista había propuesto una investigación sobre las relaciones entre dirigentes conservadores y los racistas de Rhodesia del Sur, declarando que muchos conservadores eran miembros de los consejos de administración de empresas con intereses en Rhodesia del Sur.

30. Los racistas de Salisbury no tropezaban con dificultad alguna para obtener créditos de los monopolios internacionales. En diciembre de 1961, un grupo de compañías angloamericanas habían concedido al Gobierno de Rhodesia del Sur un préstamo de 51 millones de libras esterlinas con un plazo de reembolso de 13 años; en mayo de 1962, The Standard Bank, de Nueva York, le concedió un préstamo de 1 millón de libras esterlinas; en mayo de 1964, un consorcio de empresas que representa a bancos de Alemania occidental, Francia, Italia y el Japón hizo un préstamo de 50 millones de dólares "para fines

de desarrollo". En 1964-1965, el presupuesto de Rhodesia había sido engrosado con préstamos exteriores por valor de 3.600.000 libras esterlinas, incluidos 2.500.000 libras del Gobierno de Sudáfrica. El presupuesto de 1964-1965 comprendía una partida para el reembolso de dos préstamos, uno de 2.300.000 libras esterlinas hecho por la British South Africa Company y otro de 1.100.000 libras esterlinas de la Rhodesia Anglo-American Company. Existían estrechos vínculos entre el aparato gubernamental de Rhodesia y los grupos monopolísticos. El hermano del Gobernador depuesto era uno de los vicepresidentes del principal banco colonial del Reino Unido, el Barclays Bank, DCO.

31. Ian Smith y sus secuaces hacían todo lo posible para convencer a sus amos de que estaban logrando crear la estabilidad necesaria para seguir la explotación de los recursos naturales y humanos de Rhodesia del Sur. Este país había hecho un llamamiento a los Estados Unidos para que se unieran a él en una alianza contra una supuesta amenaza comunista y efectuara inversiones en el Territorio. A cambio de ello, Rhodesia del Sur esperaba que los Estados Unidos dieran un enfoque favorable a los problemas relacionados con lo que el primer país había descrito como la perpetuación de los valores de la cultura occidental en África: en otras palabras, el mantenimiento del dominio absoluto de los racistas en el África meridional.

32. Aunque aparentemente mantenían una posición de "neutralidad" frente a los acontecimientos políticos de Rhodesia del Sur, fuertes grupos monopolísticos habían apoyado la sublevación racista en ese Territorio. Inspirada por los poderosos monopolios internacionales, la alianza "non sancta" había decidido que Smith y su régimen podrían garantizar la inviolabilidad de la posición de dichos monopolios en el sur de África y, por ello, habían tratado de transformar a Rhodesia del Sur en una suerte de cordón sanitario contra el movimiento de independencia de los pueblos africanos. Smith y sus seguidores no habrían sido capaces de hacer nada sin el apoyo de los verdaderos dueños del país, que ocupaban todas las posiciones económicas esenciales. Los racistas de Rhodesia del Sur estaban pagando el apoyo de los grandes monopolios con una política de discriminación y represión crueles contra la mayoría de la población autóctona. Si se comparaba la situación de la población europea con la de la población indígena de Rhodesia del Sur, se advertía que, en realidad, Smith seguía una política de apartheid.

33. La supremacía de las compañías extranjeras en todas las ramas de la economía de Rhodesia del Sur estaba, pues, preñada de graves consecuencias para el pueblo de Zimbabwe. La concentración del capital extranjero era tal que un pequeño número de monopolios se habían adueñado por entero del país. El papel de dirección lo desempeñaban los capitales del Reino Unido, los Estados Unidos y Sudáfrica, pero las compañías del Japón, la República Federal de Alemania y otros países capitalistas también intervenían activamente en Rhodesia del Sur. En todo el sur de África los monopolios internacionales se apoyaban en regímenes de una minoría blanca racista, cuyas políticas estaban encaminadas a establecer las condiciones más favorables para la explotación descarada de los recursos de los territorios.

34. Los monopolios internacionales que operaban en Rhodesia del Sur estaban estrechamente vinculados con los medios financieros internacionales de Sudáfrica, Angola y Mozambique, el África Sudoccidental y otros territorios coloniales del África meridional y central. Por tanto, Rhodesia del Sur mantenía vínculos políticos, económicos, militares y de otro tipo con Sudáfrica y las colonias portuguesas. Los monopolios internacionales estaban constituyendo un complejo militar e industrial con el fin de explotar a los pueblos africanos y de destruir el movimiento encaminado a lograr que el continente africano se liberase definitivamente del colonialismo. Al igual que lo habían hecho en Sudáfrica, en el África Sudoccidental y en las colonias portuguesas, los monopolios imperialistas se habían apoderado de todos los recursos naturales de Rhodesia del Sur, con lo cual los autóctonos no podían disfrutar de las riquezas de su país ni participar en

actividades industriales y financieras. En cuanto a la agricultura, la supremacía de los monopolios internacionales había conducido a la segregación económica y a la división de la economía en dos sectores: el europeo y el africano. Las compañías extranjeras eran los principales terratenientes, y controlaban la producción y comercialización de los principales cultivos de exportación: el tabaco y el azúcar. Por tanto, los autóctonos se encontraban sometidos a una doble explotación: por las compañías extranjeras y por los colonos blancos.

35. Los monopolios imperialistas ejercían decisiva influencia en la evolución política de Rhodesia del Sur. Habían colocado la administración de la colonia bajo su supervisión y dado su asentimiento a la declaración ilegal de independencia. En interés de los monopolios, el régimen y sus antecesores seguían una política de monstruosa discriminación racial en el campo económico y social. Con objeto de impedir que los representantes de la población autóctona participaran en la vida política, la minoría racista había establecido requisitos de riqueza y de grado de instrucción que privaban a los africanos del derecho de sufragio.

36. Las fuertes posiciones de los monopolios internacionales en Rhodesia del Sur permitían al régimen de Smith evadir las sanciones económicas; por tanto, los monopolios eran responsables de la acción encaminada a hacer ineficaces estas sanciones y a impedir que se aplicara en Rhodesia del Sur la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Hasta que se le concediera la independencia real, el pueblo de Zimbabwe no podría disfrutar de su derecho inalienable a disponer de los recursos de su país y a explotarlos en interés de la mayoría de la población.

37. Las actividades de los monopolios extranjeros en Rhodesia del Sur constituían, pues, el obstáculo principal a la aplicación en ese territorio de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La Asamblea General debería adoptar las medidas recomendadas por el Comité Especial en relación con las actividades de los monopolios extranjeros en el África Sudoccidental y en las colonias portuguesas.

38. El representante de Dinamarca expresó que su delegación dudaba de la procedencia de que el Subcomité tratara de llegar a conclusiones definitivas o de dirigir recomendaciones al Comité Especial dentro del limitadísimo plazo de que éste disponía antes de partir para África. La documentación era tan voluminosa, y los problemas tan complejos, que convenía hacer un examen cuidadoso antes de que el Subcomité expresara una opinión. Además, la documentación disponible se refería a una situación anterior a la declaración unilateral de independencia. Desde entonces la situación había cambiado apreciablemente, y lo que ahora importaba era saber en qué medida se estaban aplicando las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Este no había dado al Comité Especial mandato alguno para investigar esta cuestión, ni tampoco había dado el Comité Especial ningún mandato en ese sentido al Subcomité. Aun así, convenía recordar que Dinamarca había cortado todas sus relaciones económicas y comerciales con Rhodesia del Sur.

39. La cuestión pertinente que había de examinar el Subcomité era la de la medida en que los intereses extranjeros en Rhodesia del Sur podían contribuir, y contribuían, a infringir las sanciones. Sin embargo, para aclarar este asunto se precisaría más documentación, y no era probable que la Secretaría pudiera proporcionarla. A base de la documentación de que se disponía hasta ese momento, no se podían sacar conclusiones infalibles acerca de si los intereses extranjeros por sí habían ejercido alguna influencia importante en la evolución política. Además, se suscitaba la cuestión de si cabía calificar de "extranjeras" a las apreciables inversiones del Reino Unido en Rhodesia del Sur, toda vez que el Territorio era una colonia británica y, según el Comité Especial, el Reino Unido era la Potencia administradora. A juicio de la delegación danesa, lo que podía deducirse del documento de trabajo era que también en el sector económico la población africana era víctima de la discriminación y la opresión. Eso era reprensible, pero difícil-

mente podía sorprender a nadie. No obstante el análisis que el representante de Tanzania había hecho del origen del colonialismo, parecería que era la camarilla dirigente la que, con su política, había atraído al capital extranjero, y no éste el que había inspirado la política actual del régimen minoritario. No convenía inducir al Subcomité a concentrarse en las supuestas responsabilidades de los intereses extranjeros y desviarse así de su tarea esencial, que era la de poner término al régimen existente a fin de preparar al Territorio para el establecimiento de una sociedad fundada en la libre determinación y en la igualdad de derechos para todos.

40. En vista de estas consideraciones y de la delicada situación existente en Rhodesia del Sur, la delegación danesa estimaba que el Subcomité no podía ni debía cumplir en ese momento la misión que se le había confiado. Por lo tanto, sugería que el Subcomité elevara al Comité Especial un breve informe provisional en ese sentido.

41. El representante de Siria dice que ni tergiversando palabras ni con consignas se conduciría a nadie a creer que había mejorado la suerte de más de 4 millones de africanos de Rhodesia del Sur. La prosperidad la adquirirían unos pocos a costa de las masas africanas; el desarrollo se lo-graba gracias al trabajador africano, pero no en su beneficio; la situación de la balanza de pagos era favorable gracias a los beneficios de los monopolios e inversores extranjeros, que para los africanos sólo significaban más privaciones. Las mejores tierras se habían dado a los blancos por decreto: primero por una compañía todopoderosa y luego por la Potencia colonial que aseguraba llevar al país a la civilización y a la democracia. El ganado y la tierra fueron arrebatados a la población autóctona, a la que se obligó, con medidas fiscales, a buscar trabajo en las minas y en las granjas, y la tierra que no cayó en manos de la British South Africa Company fue expropiada por la Corona británica. La Corona poseía 42 millones de acres, y el grupo minoritario de colonos poseía 32 millones de acres; sólo 23 millones de acres de tierras calientes y áridas quedaban disponibles para el 94% restante de la población. La *Land Apportionment Act* alejaba toda posibilidad de que los africanos pudieran comprar tierras.

42. La Potencia colonial no había eliminado la segregación racial; la había afianzado. La *Industrial Conciliation Act* (Ley de conciliación industrial) impedía a los africanos el acceso al trabajo especializado, en tanto que protegía los salarios de los trabajadores europeos contra toda baja; la minoría tenía derechos divinos e inmutables, en tanto que los africanos se hallaban sumidos para siempre en una condición social inferior. El desarrollo de las industrias se debía a la fuerza de trabajo africana, pero no se daba reconocimiento legal a los sindicatos africanos. Privados del fruto de su esfuerzo, los africanos permanecían en las reservas indígenas, cada vez más inadecuadas. Las empresas extranjeras podían obtener ingentes utilidades porque sólo pagaban al trabajador africano un salario anual medio de 121 libras, la mitad del cual se iba en vivienda, mientras pagaban 1.241 libras al trabajador europeo.

43. Si se daba tanta importancia a la tierra era porque el problema de la tierra era fundamental, y el desposeimiento de los propietarios legítimos había sido la fuente de los males subsiguientes. Ni los colonos ni la Potencia colonial que los apoyaba tenían consideración alguna por los derechos de propiedad ni por los derechos humanos de los africanos. La legislación que la Potencia colonial promulgaba y mantenía era de todo punto discriminatoria. Los intrusos extranjeros habían llegado a considerar que su riqueza dependía de la miseria, la opresión y la extinción de los africanos; la independencia proclamada por Smith y su camarilla era una independencia para oprimir a los africanos e imponerles permanentemente una condición jurídica inferior. A decir verdad, Smith no había hecho sino continuar la tradición de sus amos. Pues el Reino Unido, aunque ostensiblemente condenaba el régimen, fue el que creó la British South Africa Company y le dio poderes sin precedente, y esa misma Poten-

cia colonial fue la que anexó Zimbabwe como colonia suya y toleró las abominables prácticas de la segregación y la discriminación. No eran consideraciones jurídicas ni escrúpulos internacionales los que impedían a la Potencia colonial emplear la fuerza contra el régimen ilegal de Smith, sino su estrecha afinidad con ese régimen, sus estrechas relaciones con los monopolios, y sus inmensos intereses creados en el Territorio.

44. La delegación de Siria suscribía sin reservas las conclusiones a que habían llegado los representantes de la República Unida de Tanzania y de la Unión Soviética sobre las actividades de intereses económicos extranjeros en Rhodesia del Sur. Se imponía adoptar medidas eficaces para resolver este problema esencialmente colonial.

45. El representante de Yugoslavia agradeció a la Secretaría, en nombre de su delegación, la preparación del documento de trabajo, que había proporcionado valiosa información al Subcomité.

46. Era bien sabido que el objetivo básico de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales era permitir que esos pueblos ejercieran su derecho a la libre determinación y a la independencia, determinaran libremente su condición política y prosiguieran su desarrollo económico, social y cultural. La Declaración afirmaba el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales, y establecía que la falta de preparación en el orden político, económico y social no debería servir nunca de pretexto para retrasar la independencia.

47. En resoluciones aprobadas por la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas se pedía el derrocamiento, por la fuerza si fuese necesario, del régimen racista de Smith y el establecimiento de un gobierno mayoritario basado en el principio de un voto por persona. Los representantes del Gobierno del Reino Unido habían afirmado reiteradamente que su Gobierno estaba dispuesto a hacer que Rhodesia obtuviera la independencia bajo un gobierno mayoritario. Sin embargo, nada indicaba que los acontecimientos políticos y económicos en Rhodesia del Sur marcharan en esa dirección. La ruta hacia el gobierno mayoritario y la independencia de las colonias de África meridional estaba resultando por cierto más larga, más difícil y más compleja de lo que hubiera parecido al principio, porque la condición jurídica de esos territorios estaba estrechamente ligada a los intereses políticos, económicos y de otra índole de las Potencias coloniales. La minoría blanca, junto con fuerzas externas, había monopolizado todos los derechos en Rhodesia del Sur, y el pueblo de Zimbabwe era sencillamente un extranjero en su propia patria, pues sus miembros estaban excluidos totalmente de la vida política, económica y cultural del país. Aunque la población africana sobrepasaba a la minoría blanca en proporción de veinte a uno, los africanos poseían por término medio 10 acres de tierra cada uno, al paso que cada europeo poseía un término medio de 170 acres. Además, la proporción de tierras aptas para el cultivo era mucho menor entre las propiedades de los africanos que entre las de la minoría blanca y las compañías extranjeras. También la legislación agraria, por su carácter discriminatorio, iba en contra de los intereses de la población africana.

48. Los intereses económicos extranjeros tenían una función decisiva en la producción de tabaco, azúcar y otros productos agrícolas, de los que obtenían grandes utilidades. Las compañías tabacaleras extranjeras, en particular las del Reino Unido, tenían considerables inversiones en Rhodesia del Sur en instalaciones para la elaboración y exportación de tabaco, y en algunos casos en fábricas de cigarrillos. Las fincas de propiedad de los europeos habían producido 1.432.000 toneladas de azúcar. Entre las compañías que controlaban la producción azucarera figuraban la Hippo Valley Estates, la Rhodesian Anglo-American Company y la Tate and Lyle Ltd.; la Rhodesian Sugar Refineries, filial de la Tate and Lyle Ltd., tenía dos refinерías en Rhodesia del Sur.

49. El dominio del capital extranjero y la explotación extranjera de los recursos humanos y naturales era particular-

mente notable en la industria minera, donde el 75% de la producción estaba en manos de grandes empresas extranjeras. Firmas como la Charter Consolidated Ltd., la Rhodesian Iron and Steel Corporation (RISCO) y las compañías del Grupo Lonrho desempeñaban un papel importantísimo en la explotación de minas y canteras.

50. Según el informe de la Comisión Económica para África titulado "Consecuencias económicas y sociales de las prácticas de discriminación racial", en 1962 la población africana representaba el 92,2% de la población total, pero sólo le correspondía el 32,3% de los ingresos personales. En el documento de trabajo se señalaba que en 1964 el salario anual medio de los 86.000 no africanos empleados había sido de 1.241 libras esterlinas, al paso que el de los 662.000 africanos empleados ascendía sólo a 121 libras esterlinas. Las oportunidades de instruirse de los africanos eran limitadas, y la cantidad gastada en su educación equivalía sólo a la décima parte de la cantidad gastada en la educación de los niños de la minoría blanca. En vista de los requisitos en materia de educación e ingresos que se debían llenar para poder votar, resultaban obvias las dificultades con que tropezaban los africanos para obtener el derecho a votar en Rhodesia del Sur.

51. Era evidente que la economía del país estaba enteramente controlada por la minoría blanca y la red de compañías extranjeras. El pueblo de Zimbabwe había sido despojado totalmente de sus derechos y sólo participaba en la vida económica del país como mano de obra barata que producía utilidades para otros. La educación, la sanidad y las prestaciones sociales estaban fuera de su alcance, y la legislación tenía por objeto impedir que se beneficiaran del desarrollo político, económico y social del país. Se había dicho con frecuencia al Comité que la población africana no estaba lista para la independencia y se la debía preparar para el gobierno constitucional, pero difícilmente cabría afirmar que la situación actual llevara en esa dirección.

52. El problema de las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole en Rhodesia del Sur era sumamente complejo. El Comité Especial examinaría la cuestión de Rhodesia del Sur en general en su período de sesiones en África. La delegación de Yugoslavia consideraba que mientras estuviera allí el Comité debía oír a los peticionarios sobre todos los aspectos de los problemas de Rhodesia del Sur y obtener así un cuadro más completo de la grave situación en ese país. La nueva información así obtenida sería de gran valor para el futuro examen del problema de Rhodesia del Sur. La delegación de Yugoslavia consideraba, pues, que el Subcomité no debía dar por terminados sus debates sobre el tema que estaba considerando.

53. El representante de Túnez dijo que su delegación no había podido estudiar el documento de trabajo preparado por la Secretaría por no haber sido publicado aún en francés.

54. En ciertas esferas se había expresado sorpresa al ver que los países recién independizados, al mismo tiempo que solicitaban capital extranjero para su desarrollo económico y social, no vacilaban en criticar las actividades de los monopolios extranjeros en los países que estaban aún bajo el dominio colonial. Sin embargo, había buenas razones para ello. En los países independientes el capital extranjero podía ser un factor de bienestar y prosperidad, porque las compañías interesadas desarrollaban sus actividades dentro del contexto de los planes de desarrollo nacionales y bajo el control de las autoridades nacionales. Sus actividades podían así ser dirigidas en forma tal que beneficiaran al pueblo. Sin embargo, en los países que estaban aún bajo el dominio colonial, el capital extranjero sólo buscaba el provecho en detrimento de la población autóctona. Servía al régimen colonial, que lo protegía y que en muchos casos le había ayudado a establecerse. Al pueblo le traía sencillamente empobrecimiento y servidumbre. Todos los pueblos que fueron colonias habían pasado por esa situación, y ahora se la podía ver en Rhodesia del Sur, donde se caracterizaba por una injusticia social aún mayor y una explotación aún más escandalosa que en otras partes. Los oradores anteriores se habían referido detallada-

mente a la situación económica y social en el país y a las actividades de las principales compañías que compartían su riqueza. El Sr. Sahli se limitaría, pues, a hacer unas pocas observaciones.

55. En primer lugar, cabía hacer notar que toda la economía de Rhodesia del Sur estaba en manos de monopolios extranjeros que podían, por consiguiente, controlar también todo el mecanismo administrativo y desempeñar un papel preponderante en los asuntos políticos. Aprovechando la legislación social que habían dictado para servir su propia conveniencia y que había convertido a la población africana en una mano de obra barata y nada más, estaban en condiciones de multiplicar las utilidades que obtenían de las concesiones agrarias y mineras adquiridas generalmente por aquello de que "la fuerza da derechos". Era inconcebible que fueran a renunciar voluntariamente a sus privilegios y permitir la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

56. En segundo lugar, la mayoría de las compañías interesadas tenían su sede en el exterior. Como resultado de ello, la mayor parte de las riquezas se sacaba de Rhodesia del Sur y en el país sólo quedaba lo necesario para el bienestar de la minoría blanca y para aumentar más las utilidades de los monopolios. El pueblo no se beneficiaba en absoluto.

57. En tercer lugar, las compañías extranjeras que desarrollaban actividades en Rhodesia del Sur no se limitaban a ese país. Tenían muchas filiales y sucursales en otras partes, sobre todo en Sudáfrica y en los territorios bajo administración portuguesa. Si actuaban por intermedio de esas compañías subsidiarias, podían anular el efecto de cualquier sanción económica.

58. Por esas razones su delegación estimaba que el Subcomité debía recomendar al Comité Especial que considerase las actividades de los monopolios extranjeros en Rhodesia del Sur como un obstáculo grave a la liberación del pueblo de Rhodesia del Sur y a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

59. Señaló, por último, que la situación actual en Rhodesia del Sur había estado a punto de producirse en Argelia. Los colonos y los que obtenían sus utilidades de las empresas extranjeras en Argelia trataron en un momento de derrocar la autoridad de París. Francia no se decidió en favor de sanciones económicas inútiles, sino que fue a la raíz del asunto y empleó la fuerza; como resultado de ello fue posible entablar negociaciones útiles con los nacionalistas argelinos. El Reino Unido pudo haber seguido ese ejemplo con provecho.

60. El representante de Malí dice que oradores anteriores habían analizado la naturaleza del colonialismo y demostrado que su finalidad era explotar a los colonizados. Su delegación compartía plenamente las opiniones expuestas por las delegaciones de Tanzania y la Unión Soviética acerca de los crímenes cometidos por los capitalistas del Reino Unido y de otros países. No era posible analizar las actividades de los intereses extranjeros en Rhodesia del Sur sin tener en cuenta la función que la Potencia administradora había tratado de asignar al Territorio. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX los países europeos levantaron sus imperios coloniales, el fin perseguido no había sido, como a veces se decía, civilizar a los pueblos de color, sino crear mercados para sus excedentes de productos industriales, a cambio de lo cual podrían adquirir materias primas a bajo costo.

61. Rhodesia del Sur poseía importantes recursos naturales y un clima ideal para los europeos. En consecuencia, el Reino Unido decidió desde un principio colonizar dicho Territorio. Se expulsó a la población indígena y se distribuyeron las tierras entre los colonos del Reino Unido. Apenas terminada la guerra de ocupación, la administración colonial promulgó una ley por la que se instaló a los africanos en reservas. La superficie total asignada al pueblo de Zimbabue fue de 21 millones de acres, pero se asignaron 31 millones de acres al pequeño número de colonos blancos. El resto del Territorio, o sea unos 42 millones de acres, siguió

siendo propiedad de la Corona. En 1930 el Gobierno del Reino Unido promulgó la primera *Land Apportionment Act*, que introdujo un rígido sistema de segregación de tierras. Más del 50% de la superficie del Territorio fue asignada a los europeos, y los africanos perdieron el derecho a adquirir tierras excepto en una limitada zona de 7.500.000 acres. El suelo de esa zona era pobre y resultaba difícil cultivar cereales en ella sin hacer grandes gastos en regadío y abonos. Como los africanos carecían del capital y de los conocimientos necesarios para explotar las tierras, se vieron reducidos a la pobreza. Los colonos, en cambio, recibieron toda clase de incentivos para producir los cultivos requeridos por la industria del Reino Unido. En vez de diversificar sus cultivos alimenticios, Rhodesia del Sur se convirtió en abastecedor de tabaco y azúcar.

62. En 1953 el Gobierno del Reino Unido estableció la Federación de Rhodesia y Nyasalandia a fin de hacer más fácil el despojo del país. Se confirieron plenos poderes en materia económica a las autoridades federales, que representaban los intereses de los colonos racistas y de los financieros del Reino Unido. Esto confirmó las siniestras intenciones del Gobierno del Reino Unido para con un pueblo al que, según la Carta, debía preparar para la independencia. Como resultado de la política del Reino Unido, el nivel de vida de los colonos fue aumentando constantemente, en tanto que el de los africanos se estancó o hasta disminuyó. En efecto, entre 1954 y 1964, el producto interno per cápita de los colonos blancos aumentó de 56,1 a 77,4 libras esterlinas, mientras que el de los africanos disminuyó de 12 a 11 libras. Ante la imposibilidad de subsistir con el producto de sus tierras, los africanos se habían visto obligados a vender su trabajo a las compañías ansiosas de explotarles. Entre 1954 y 1962 se establecieron en la Federación 470 compañías que operaban en muchos y diferentes campos, y cuyos beneficios netos ascendieron en 1963 a 172.700.000 libras esterlinas. Esos beneficios fueron exportados al Reino Unido, contribuyendo así al empobrecimiento de Rhodesia. Todas las fuentes de verdadera riqueza económica quedaron en manos de los blancos, con lo que se creó desequilibrio que no podía dejar de originar fricciones.

63. El Reino Unido no era el único que explotaba las riquezas naturales de Rhodesia del Sur. Capitales canadienses, japoneses y estadounidenses fueron también invertidos en el Territorio de diferentes maneras. La industria del automóvil estaba controlada por la Ford Motor Company de Rhodesia, filial de la Ford de Canadá. La Wankie Colliery Company extraía el carbón de Rhodesia con la cooperación de otras compañías como la Rhodesian Anglo-American Limited, filial de la Anglo-American Corporation de Sudáfrica. La producción de electricidad estaba monopolizada por los mismos intereses. Las enormes reservas de carbón de Rhodesia y el embalse de Kariba habían permitido desarrollar la industria pesada utilizando los grandes yacimientos de minerales del país. La Rhodesian Iron and Steel Company tenía ya una planta siderúrgica en funcionamiento, cuyos beneficios iban a parar íntegramente a los *trusts* del Reino Unido. Se extraían metales preciosos y se los exportaba a Europa y a los Estados Unidos, pero los ingresos así obtenidos no beneficiaban a los africanos, que seguían careciendo de escuelas, hospitales y viviendas. Sus condiciones de trabajo eran muy duras y dependían de la buena voluntad de la administración y de los colonos. No tenían posibilidad alguna de ser admitidos a puestos superiores que les proporcionarían una vida decente. Los que lograban acumular algún capital eran objeto de constante persecución o expulsados de sus tierras con una nimia indemnización. Desde la firma del acuerdo tripartito entre Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur, los colonos podían librarse fácilmente de esas personas transfiriéndolas a las compañías sudafricanas.

64. La red de transportes del país estaba igualmente planeada para facilitar la explotación, y uno de los resultados era que Zambia se encontraba ahora a merced de los racistas blancos de Rhodesia del Sur. Los principales socios comerciales de Rhodesia del Sur, aparte del Reino Unido, eran los Estados Unidos, la República Federal de Alemania, los

Países Bajos, Japón y Australia. Pese a todas las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, Portugal y Sudáfrica seguían manteniendo relaciones normales con el régimen de Smith, comerciando con él y ayudándole a conservar el poder que había usurpado.

65. La razón de la actitud del Reino Unido en el asunto de Rhodesia era, por tanto, clara. Su indecisión respondía únicamente al deseo de proteger los intereses de los capitales del Reino Unido. No era posible aceptar su afirmación de que procuraba derrocar el Gobierno de Smith mediante un embargo económico, pues los grandes *trusts* del Reino Unido eran los que apoyaban a Smith. El Reino Unido debería comprender que su política no era la mejor manera de proteger sus intereses en Africa. Tenía que restablecer los derechos del pueblo de Zimbabwe y sólo entonces discutir con éste las condiciones en que podrían hacerse inversiones en beneficio de ambas partes. Debía cumplir las obligaciones que le correspondían en virtud de la Carta y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Al entregar el poder a Smith y su camarilla, el Reino Unido había violado ambos instrumentos. La única vía que les quedaba a los africanos para recuperar su país y su dignidad era la de la violencia. El presupuesto de Rhodesia recientemente publicado permitía ver claramente que las sanciones económicas no habían tenido, ni mucho menos, los resultados esperados. Corrían insistentes rumores acerca de la concertación de un acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y el régimen de Smith. De confirmarse esos rumores, habría allí una odiosa traición a los africanos y una prueba más de la comunidad de intereses entre los círculos financieros del Reino Unido y los colonos de Rhodesia.

B. Conclusiones

66. Habiendo estudiado las consecuencias de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole en Rhodesia del Sur y la forma en que operan, el Subcomité ha llegado a las siguientes conclusiones respecto de su influencia económica y política.

67. Los intereses económicos y conexos desempeñan un papel decisivo en la vida económica de Rhodesia del Sur. Los principales sectores de producción están controlados por empresas propiedad de extranjeros que, en conjunto, representan más del 80% del capital invertido en el Territorio, y por los colonos de origen europeo, principalmente del Reino Unido y de Sudáfrica. Estos intereses ocupan una posición dominante en las industrias de explotación primaria altamente rentables, especialmente en la industria minera y, con la colaboración de colonos europeos, en la producción de tabaco y de azúcar. También ejercen una influencia predominante en la banca y las finanzas y en las principales industrias manufactureras.

68. Las empresas extranjeras que operan en Rhodesia del Sur están estrechamente vinculadas a intereses económicos y financieros internacionales en otras partes del Africa meridional y, juntamente con esos intereses, han contribuido directa o indirectamente a negar a los pueblos africanos los medios de participar efectivamente en la vida económica y de aprovechar los recursos de su país. Así, han impuesto a la población africana del Territorio unas formas de producción anticuadas, han puesto trabas a su desarrollo económico, social y educativo y han creado serios obstáculos a la realización de sus aspiraciones a la libertad y la independencia.

69. La pauta de explotación implacable de los recursos humanos y materiales del Territorio la estableció durante el último decenio del siglo XIX la British South Africa Company (BSAC). Armada del monopolio, que le otorgó la Corona británica, de explotación de la riqueza minera del Territorio, y dotada de amplios poderes de jurisdicción y de gobierno, esta compañía utilizó la coacción y la fuerza física para eliminar a los africanos que se oponían a sus pretensiones y para expropiar los terrenos pertenecientes a la po-

blación africana, a fin de instalar en ellos concesiones mineras o colonos europeos. De la explotación de los recursos agrícolas y mineros del Territorio, la compañía se transformó poco a poco en un *trust* financiero, con intereses en ferrocarriles y otras empresas, y llegó a ser una fuente de crédito importante para los pequeños y medianos empresarios europeos.

70. Cuando en 1923 se produjo la anexión oficial del Territorio por el Gobierno del Reino Unido, el poder político fue transferido de la Compañía a los colonos europeos en virtud de un sistema de "autonomía interna", que excluía efectivamente la participación de la población africana. Las nuevas disposiciones constitucionales abrieron el camino a la influencia de otros intereses extranjeros, económicos y conexos. Al mismo tiempo, los colonos europeos que originalmente vinieron al Territorio bajo los auspicios de la BSAC pasaron a colaborar con las nuevas empresas en la explotación de la tierra y de los habitantes del Territorio.

71. En consecuencia, los intereses de las empresas extranjeras que operan en el Territorio y los de los colonos europeos están íntimamente ligados y son interdependientes. Las compañías extranjeras necesitan a los colonos europeos para mantener sometida a la población africana, a fin de preservar lo que ellas consideran un ambiente favorable para sus inversiones. Por su parte, los colonos dependen de esos intereses extranjeros, que les proporcionan el capital necesario para la explotación de las riquezas naturales del Territorio.

72. Los intereses extranjeros son predominantes en la minería, la banca y las finanzas, y en las principales industrias manufactureras. Aunque hasta cierto punto participan en las industrias manufactureras secundarias, los colonos europeos se dedican principalmente al cultivo del tabaco, que es el principal cultivo comercial y la exportación más importante. Sin embargo, la financiación del cultivo del tabaco en particular, y la de la agricultura en general, exigen el capital que proporcionan los intereses extranjeros.

73. El predominio del capital extranjero en la explotación de los recursos humanos y materiales del Territorio es particularmente manifiesto en la industria minera. En dicha industria se encuentra el 90% del capital privado invertido en el Territorio, y el 75% de la producción total de ese sector está en manos de grandes empresas extranjeras.

74. Entre los principales intereses mineros y financieros en Rhodesia del Sur figuran los de la British South Africa Company, cuyo activo pasaba de 80 millones de libras en 1964, y la Anglo-American Corporation, que es la mayor empresa financiera en la minería de Sudáfrica. Desde 1937 los intereses de ambas están ligados.

75. En 1963, la British South Africa Company tenía inversiones en Rhodesia del Sur en la silvicultura, las explotaciones agropecuarias, la producción de agrios, los molinos harineros y la panadería, así como en la producción de hierro, de acero y de ferrocromo. Sus posesiones agrícolas representaban 144.000 acres, en los que trabajaban 120 europeos y 3.000 africanos. Sin embargo, sus haberes en Rhodesia sólo representaban una pequeña proporción de su activo total. Sus inversiones industriales y de otros tipos en Rhodesia ascendían el 30 de septiembre de 1963 a 6.700.000 libras, en tanto que sus inversiones totales en el mundo representaban 66.400.000 libras.

76. El principal registro de acciones se llevaba en el Reino Unido; en Salisbury y en Johannesburgo existía un registro del Dominio. En la lista de filiales e intereses del grupo en 1963 figuraban un gran número de compañías registradas en el Reino Unido, Rhodesia del Sur, Canadá y Suiza. En virtud de la modificación de la Carta de la Compañía, adoptada en 1962, por lo menos las dos terceras partes de los consejeros, incluidos el Presidente y el Vicepresidente y el representante principal de la compañía en Africa debían ser súbditos británicos.

77. No se dispone de cuentas financieras separadas de la compañía respecto de sus operaciones en Rhodesia del Sur. En 1963, la British South Africa Company declaró benefi-

cios de más de 8 millones de libras esterlinas después de deducidos los impuestos.

78. El 1° de abril de 1965, la British South Africa Company se fusionó con otros dos grupos, la Central Mining and Investment Corporation y la Consolidated Mines Selection Company, que están vinculadas al Anglo-American Group, para constituir la nueva Charter Consolidated, Ltd. La nueva compañía tiene un activo de más de 142 millones de libras esterlinas. La Consolidated Mines Selection representaba una parte importante de los intereses no africanos del Anglo-American y tenía su central en Londres. Además, tanto la Charter como la Consolidated poseían acciones en la Central Mining, que también era de intereses de Londres. En virtud del nuevo arreglo por el que se estableció la Charter Consolidated, los miembros del Anglo-American Group son el grupo más grande de accionistas de la Charter Consolidated (aproximadamente el 30% del capital). Los intereses de la Charter Consolidated están distribuidos de la siguiente manera: el 39% en la República de Sudáfrica, el 16% en el resto de África, el 23% en América del Norte y el 22% en otras partes. El Presidente de la nueva compañía es el Sr. P. V. Emrys-Evans (Reino Unido), que antes de la fusión era Presidente de la British South Africa Company.

79. Después de constituida la Charter Consolidated, se llegó a un acuerdo con la Zambia-Anglo-American para fusionar sus intereses en Rhodesia con la Amrho Company (AMRHO, Anglo-American Corporation (Rhodesia) Ltd., denominada anteriormente Rhosouth Ltd., que es subsidiaria de propiedad total de la Zambia-Anglo-American Ltd.). Como resultado de esta fusión, el activo neto de la Amrho aumentó en unos 19.600.000 libras esterlinas. La compañía es propiedad de la Zambia-Anglo-American en el 47,7% y de la Charter Consolidated en el 36,9% de las acciones.

80. Entre otros grupos mineros figura la Lonrho Ltd., que anteriormente se denominaba London and Rhodesia Mining and Land Company, Ltd., que cambió de nombre en 1963. Hacia fines de 1964 había emitido casi 5.750.000 acciones, el 54% de las cuales estaban en poder de cinco grupos: La British South Africa Company (actualmente Charter Consolidated), el Drayton Group, el Anglo-American Group, unas subsidiarias de la Lonrho, y la Standard Bank Nominees. La identidad de esta última compañía es desconocida, aunque es del mayor interés, dada la capacidad de la Lonrho de reunir grandes sumas en efectivo para muchas de sus compras. La compañía realiza importantes operaciones en Sudáfrica, Rhodesia del Sur y Mozambique. También ha procurado comprar en zonas de "riesgo político" en las que se encuentran buenas oportunidades. La compañía, que durante un tiempo obtenía todos sus beneficios explotando las minas de oro de Rhodesia, actualmente abarca muchas esferas: las plantaciones producen los mayores beneficios; además se dedica al comercio de motores, explotaciones agropecuarias, minería, fermentación de "chibuku", periódicos, hoteles, fábricas de clavos y de hielo seco, y ferrocarriles (Malawi). Los terrenos de propiedad de la compañía en Rhodesia del Sur exceden de 1 millón de acres. En 1961, los intereses directos de la compañía en el sector de la minería abarcaban 164 concesiones de extracción de oro, algunas concesiones de extracción de metales básicos, propiedad de terrenos de una superficie de 873.362 acres y 18 puestos en ciudades. Algunas de las propiedades mineras, tales como la Muriel Mine, pagaban regalías a otras compañías. La Lonrho Ltd. es también la principal accionista de la Companhia do Pipeline Moçambique-Rhodésia.

81. El capital fijo de la compañía estaba evaluado en 1963 en 7.142.000 libras. No se dispone de estados de cuentas de la compañía respecto a sus operaciones en Rhodesia del Sur. Desde junio de 1958 el balance consolidado después de deducidos los intereses minoritarios ascendió de 1.650.236 a 3.657.007 libras; los ingresos antes de las deducciones por depreciación, impuestos e intereses minoritarios aumentaron de 128.000 a 1.308.011 libras. El Lonrho Group tiene un interés minoritario muy considerable, pero los beneficios del capital de la compañía central han aumentado del 7,5% al 29,25%, y los dividendos del 5% al 18,33%.

82. Otro grupo es el Selection Trust Limited, que tiene intereses en el África meridional y central en una amplia variedad de actividades mineras. La pertenencia aislada más grande de la compañía es de la American Metal Climax (AMAX). Sus intereses principales incluyen el Roan Selection Trust, Ltd., llamado anteriormente Rhodesian Selection Trust, Ltd. No se dispone de estados de cuentas de la compañía respecto de sus operaciones en Rhodesia del Sur. Los ingresos brutos de la compañía durante el año que terminó el 31 de marzo de 1965 pasaron de los 5 millones de libras por primera vez, y fueron casi 1 millón de libras mayores que en el año precedente. Después de descontados los gastos, los impuestos, y los intereses minoritarios, los beneficios netos fueron de 2.490.739 libras, mientras que el año anterior habían sido de 1.988.355.

83. También está la compañía Turner and Newall, Ltd. del Reino Unido, cuyas ganancias fueron de 12.700.000 libras en 1962-63, y que controlaba el 63% del asbesto, del que Rhodesia del Sur es el primer productor mundial. Del mismo modo, la producción de cromo está en gran parte en manos de algunas nuevas compañías extranjeras, entre las que se cuentan la London Chrome Company Ltd., que está controlada por intereses británicos y norteamericanos, y la Vanadium Corporation of America. Esta obtuvo un beneficio neto de 2.494.446 dólares en 1959. La explotación de litio, cobre y carbón está controlada casi exclusivamente por la Bikita Minerals (Pvt.), Ltd., la Messina (Transvaal) Development Company (Mangula), Ltd., y Wankie Colliery Company, Ltd., respectivamente.

84. En el sector de la metalurgia de ferrosos, la empresa más importante es la Rhodesian Iron and Steel Company, Ltd. (RISCO). Hay muchos accionistas en esta compañía, entre ellas las empresas británicas Lancashire Steel and Stewarts and Lloyds, y la Anglo-American Corporation, Rhodesia Selection Trust, British South Africa Company, Messina (Transvaal) Development Company y Tanganyika Concessions. La RISCO informó que en el primer semestre de 1965 había obtenido una utilidad neta de alrededor de 450.000 libras, equivalentes casi a la utilidad registrada en todo el año 1964. Entre otros acontecimientos en materia de metalurgia de ferrosos, se produjo una reciente afluencia de capital japonés. Se han hecho concesiones a dos grandes empresas japonesas para la explotación de mineral de hierro, a fin de producir hierro en bruto, y para la construcción de un nuevo alto horno destinado a la RISCO. Sin embargo, en enero de 1966, una de las empresas japonesas avisó que cerraría su mina de hierro en Rhodesia del Sur. Se informa que se han encontrado importantes yacimientos de magnetita; los explotarán la Culliman Refractories, Ltd. y la Vereeniging Brick and Tile, ambas empresas sudafricanas.

85. Muchas de las empresas citadas se han dedicado, además de la minería, a la agricultura y a las industrias manufactureras, y ahora controlan prácticamente todos los sectores de la economía, inclusive la producción de tabaco, azúcar, productos forestales, frutas cítricas y propiedad inmueble.

86. Como ya se ha dicho, los intereses económicos extranjeros, particularmente los provenientes del Reino Unido, desempeñan un papel prominente en lo relacionado con el tabaco, que es el producto de exportación más importante del Territorio. Con la excepción de algunas plantaciones controladas por empresas tales como la South African Mutual Insurance Group, el cultivo del tabaco está principalmente en manos de los colonos europeos. Sin embargo, las empresas extranjeras tienen considerables inversiones en la elaboración de tabaco, en los servicios de exportación y comercialización en el Territorio y, en algunos casos, en las fábricas de cigarrillos. Las principales de estas compañías están controladas por Imperial Tobacco, Gallaher, British American Tobacco Ltd. y Rothmans Tobacco.

87. La producción de azúcar en el Territorio está a cargo de grandes inversionistas extranjeros que han establecido modernas y eficientes plantaciones con la cooperación de las autoridades de Rhodesia del Sur, que están construyendo

grandes represas para regar extensas zonas con ese objeto. Entre los principales productores de azúcar se encuentra la Triangle Limited, que es una empresa subsidiaria de propiedad exclusiva de la Sir J. L. Hulleys and Sons (Rhodesia), Ltd.; esta empresa es a su vez propiedad de la Hulleys Sugar Corporation, Ltd., la mayor empresa productora de azúcar de Sudáfrica. No se dispone de estados de cuentas de la Triangle Ltd. En 1963, el Hulleys Group tuvo en conjunto una ganancia neta, después de deducir los impuestos, de 2.600.000 libras, con una producción total de 584.000 toneladas de azúcar. Otro productor importante es la Hippo Valley Estates, Ltd., cuyos principales accionistas son la Rhodesian Anglo-American Company y la Tate and Lyle, Ltd., la gran empresa azucarera británica. La compañía arrojó utilidades por valor de 146.284 libras en el ejercicio terminado el 31 de marzo de 1963, y de 393.605 libras el año siguiente. La producción de azúcar de esta empresa fue de 37.000 toneladas durante 1964. La Rhodesia Sugar Refineries, afiliada de la Tate and Lyle, Ltd., tiene dos refineries en el Territorio.

88. Los colonos europeos tienen una posición más importante en las industrias secundarias que en la minería y en las principales industrias manufactureras. Sin embargo, cuentan con la colaboración de varias subsidiarias de empresas del Reino Unido y de Sudáfrica, cuyo papel en este sector no es despreciable. Aparte de las empresas ya citadas, entre las compañías que operan en este sector figuran la Ford Motor Company of Rhodesia, subsidiaria de la Ford of Canada, la Premier Portland Cement Company (Rhodesia) Ltd., de la que es filial una empresa asociada de la South African Pretoria Cement Company y la Rhodesian Cement Ltd., y la Rhodesia Bata Shoe Company, que produce el 90% de todo el calzado de cuero del Territorio.

89. La despiadada explotación de los recursos humanos y materiales del Territorio fue reforzada por la *Land Apportionment Act* aprobada en 1930. Esta ley, entre otras cosas, legalizó la expropiación de la tierra africana que había sido iniciada por el BSAC. En virtud de la ley, con las enmiendas introducidas posteriormente, el 38% de la superficie total de la tierra se asigna al uso exclusivo de los colonos pertenecientes a la comunidad europea, que alcanzan a unos 240.000, y aproximadamente el 45%, en teoría, a los 4 millones de africanos del Territorio. La zona asignada a los colonos europeos incluye las tierras más aptas para el cultivo y mejor ubicadas. Además, estos colonos que en la práctica cultivan solamente el 3,5% de la tierra que les ha sido asignada, pueden adquirir tierras en las partes de la región de africanos conocidas como regiones de compra para los nativos, con el pretexto de poner en práctica proyectos en beneficio de los "nativos". Como consecuencia de la presión ejercida sobre la región de compra para los nativos, hay más de 7.000 africanos que han adquirido capacitación para realizar actividades agrícolas en tierras de propiedad particular pero no pueden obtener parcelas.

90. La expropiación del 38% de la tierra del Territorio para el uso exclusivo de la comunidad de colonos europeos y de las compañías extranjeras, según un sistema de apartheid basado en la discriminación racial, ha infligido penurias económicas indecibles a los africanos y ha provocado graves problemas políticos en el Territorio. Manteniendo a los africanos en reservaciones y localidades especiales, la comunidad de colonos puede fiscalizar mejor sus movimientos y evitar que disfruten de los servicios sociales y de bienestar, y también impedir su adelanto político.

91. Los africanos, privados de su legítima participación en los frutos de la tierra, no han aprovechado los servicios educativos y de divulgación agrícola que les permitirían lograr un empleo realmente beneficioso de sus tierras. Por ejemplo, entre 1954 y 1964, el producto nacional per cápita de los africanos disminuyó de 12 libras a 11 libras, mientras que el de los europeos aumentó de 56,1 libras a 77,4 libras. En 1962, la participación de la población africana en el ingreso personal total fue de 32%. Además, debido a su rápido crecimiento demográfico, los africanos se encuentran cada vez más hacinados y buena parte de su tierra está sometida a la erosión. En consecuencia, se han visto obligados

a trasladarse en número cada vez mayor desde las zonas rurales para buscar trabajo en las plantaciones pertenecientes a europeos y en la minería y las industrias manufactureras. En esta forma, la población africana está disponible como fuente de mano de obra barata para el aprovechamiento de las zonas de los europeos del Territorio.

92. Inclusive en esa condición, la población africana recibe salarios lamentablemente bajos. Las cifras oficiales mencionan un ingreso anual medio en 1964 de 1.214 libras para los europeos y de 121 libras para los africanos, del cual la mitad aproximadamente se gasta en vivienda. La *Industrial Conciliation Act* impide de hecho a los africanos el acceso a los puestos especializados, mientras que los salarios de los trabajadores europeos están protegidos contra la disminución. Hay una gran diferencia entre los salarios que se pagan a los africanos y los que reciben los europeos por el mismo trabajo. Además la contracción de la economía en los últimos años ha tenido como consecuencia una disminución real en la fuerza de trabajo, lo que ha provocado un importante desempleo entre los trabajadores africanos. La mayoría de los sindicatos están segregados en la práctica, y, excepto la Rhodesia Railways African Employees Association, los sindicatos africanos no tienen legalmente derechos en materia de negociaciones colectivas.

93. A lo largo de los años, los intereses económicos extranjeros han prestado asistencia financiera directa e importante a las autoridades de Rhodesia del Sur. En diciembre de 1961, un grupo de compañías anglo-norteamericanas les concedieron un préstamo de 51 millones de libras reembolsable durante un plazo de 13 años. En mayo de 1962, el Standard Bank of New York les concedió también un préstamo de 1 millón de libras. También en mayo de 1964 las autoridades del Territorio recibieron préstamos que ascendían a 50 millones de libras "para el desarrollo" de un grupo de compañías que representan intereses financieros de la República Federal de Alemania, Francia, Italia y Japón. Además, en el presupuesto del Territorio para 1964-65 figuran préstamos del extranjero que ascienden a 3.600.000 libras, incluyendo 2.500.000 libras del Gobierno de Sudáfrica, así como una partida que incluye el reembolso de préstamos de 2.300.000 libras del BSAC y de 1.100.000 libras de la Anglo-American Company.

94. Desde la declaración ilegal de la independencia, el régimen de Ian Smith reaccionó ante las sanciones financieras y económicas internacionales y el embargo sobre el petróleo regulando la economía para poder resistir su efecto. Con este propósito, el régimen asumió varios poderes de emergencia para controlar el comercio externo e interno del país, con el propósito de redistribuir, donde sea necesario, los recursos económicos del país. El sector privado de la economía representado por la agricultura, el comercio y la industria y la minería, que en su casi totalidad pertenece a los colonos europeos y a las empresas extranjeras y está bajo su dirección, se ha puesto en pie de guerra para apoyar las medidas económicas tomadas por el régimen.

95. Aunque a principios de 1965 las principales organizaciones comerciales de Rhodesia del Sur, a saber, la Association of Rhodesian Industries y la Association of Chambers of Commerce of Rhodesia, habían expresado preocupación por las consecuencias económicas de una declaración unilateral de independencia, después de la declaración han cooperado con el régimen ilegal para evitar que la economía del país sufra todo el efecto de las sanciones. Las industrias manufactureras, con la cooperación del régimen de Smith, han estado diversificando su producción para lograr la autosuficiencia de Rhodesia del Sur en artículos que antes se importaban, ayudando así a eliminar la escasez de ciertos productos y a ahorrar divisas para el régimen. En consecuencia, las sanciones sólo han creado un mercado local más grande para los manufactureros locales, a quienes se ha instado a satisfacer las necesidades del consumo local que ahora no pueden satisfacerse plenamente, con productos extranjeros. Según los portavoces del régimen, el comercio ha funcionado tan bien que ha podido conceder créditos al sector agrícola de la economía.

96. El Reino Unido ha declarado ilegal específicamente la exportación desde el Territorio de cromo y mineral de hierro y, posteriormente, de lingotes de fundición y asbesto, pero no hay indicios de que las compañías afectadas estén en ningún caso cerca del derrumbe. El Reino Unido todavía no ha incluido al cobre, el níquel, el oro y algunos otros metales en la categoría de exportaciones prohibidas a terceros países. En consecuencia, estos artículos todavía pueden ser exportados legalmente desde Rhodesia del Sur, con arreglo a las leyes de terceros países. A pesar de las sanciones, se están abriendo nuevas minas y expandiendo otras viejas en el Territorio, en particular por la Anglo-American Corporation. Se informa que hasta mediados de 1965, intereses de la República Federal de Alemania importaban cobre y asbesto del Territorio. Según estos informes, intereses japoneses también importaban asbesto.

97. Las sanciones económicas y financieras impuestas por el Reino Unido apuntaban, entre otras cosas, a negar al régimen ilegal créditos para la financiación de los cultivos industriales y a negar a los agricultores el acceso a los mercados internacionales de que dependen sus productos. A pesar de estas sanciones, el régimen ilegal se las arregló para financiar la compra de la cosecha de tabaco de este año con una suma estimada en 25 millones de libras, y para pagar a los agricultores sumas suficientes para sufragar el costo de la producción de la cosecha actual. La financiación de la cosecha de tabaco pudo hacerse gracias en gran medida a la cooperación del capital financiero de Rhodesia del Sur, representado por las casas banqueras y financieras de Rhodesia del Sur. Por consiguiente, hay indicios de que la comunidad agrícola de los colonos europeos está en condiciones de sobrevivir sin serias consecuencias otro año de sanciones.

98. Las empresas económicas extranjeras y locales de Sudáfrica, con el apoyo del Gobierno de Sudáfrica, han aprovechado el embargo impuesto a Rhodesia para aumentar su comercio con el Territorio. Los datos disponibles indican que la industria y el comercio sudafricanos en los niveles local e internacional no sólo han estado comerciando con Rhodesia, sino que también han proporcionado servicios de tránsito para la exportación clandestina de artículos de Rhodesia del Sur producidos por las empresas homólogas del Territorio. Además, una casa de confirmación de Rhodesia del Sur, la Rhodesian Industrial Confirming (Private) Ltd., ha establecido una sucursal en Johannesburgo para ayudar a los importadores de Rhodesia del Sur a conseguir créditos y a los exportadores de Sudáfrica y otras partes a encontrar mercados en el Territorio.

99. Los intereses portugueses también han aprovechado, aunque en menor medida, las sanciones para ampliar sus relaciones comerciales con Rhodesia del Sur, y Portugal sigue proporcionando a Rhodesia del Sur servicios de transportes ferroviarios y mano de obra para sus exportaciones a través de Mozambique.

100. El embargo sobre el petróleo y productos del petróleo de Rhodesia del Sur ha tenido éxito sólo en el sentido de que se ha introducido el racionamiento y ha habido un aumento de los precios de estos productos. Sin embargo, dentro del sistema de racionamiento siguen llegando al Territorio, desde Mozambique y Sudáfrica, petróleo y productos del petróleo en cantidad muy superior a las necesidades del Territorio. Dado que tanto Sudáfrica como Mozambique son importadores de petróleo y de productos del petróleo y dependen en ese sentido de empresas internacionales estadounidenses, británicas, holandesas y belgas, es difícil eximir a esas empresas de responsabilidad por la llegada de estos productos al Territorio.

101. Según los portavoces del régimen ilegal, intereses comerciales de Rhodesia del Sur han podido mantener, además del comercio manifiesto, relaciones comerciales encubiertas con muchos importadores y exportadores extranjeros. De hecho han afirmado que Rhodesia del Sur ha aumentado su comercio con muchos países de fuera de África. Teniendo en cuenta la relativa ineficacia de las sanciones sobre la economía de Rhodesia del Sur, no hay razón para poner en duda esta afirmación.

C. Recomendaciones

102. El Subcomité considera que el Comité Especial debe recomendar que la Asamblea General:

a) Condene la política colonial del Gobierno del Reino Unido que ha dado como resultado la instauración del actual régimen racista minoritario basado en la explotación colonial de los recursos naturales y humanos del Territorio en detrimento de los derechos e intereses de la población indígena de Rhodesia del Sur;

b) Condene una vez más la declaración ilegal de independencia hecha por los colonos blancos de Rhodesia del Sur, que representan los intereses económicos y financieros de los monopolios internacionales, así como a todas las fuerzas reaccionarias;

c) Reafirme los derechos de la población indígena del Territorio a la libre determinación y a la auténtica independencia, y la legitimidad de su lucha por lograr la liberación tanto económica como política;

d) Condene enérgicamente las actividades y los métodos de operación en Rhodesia del Sur de los intereses extranjeros económicos y de otra índole, que apoyan al régimen racista minoritario en su represión de la población africana del Territorio y en su desafío a la opinión pública mundial;

e) Haga un llamamiento a las Potencias interesadas para que ejerzan su influencia sobre aquellos de sus nacionales que poseen o dirigen empresas en Rhodesia del Sur con objeto de que pongan fin a sus actividades, que impiden la consecución de la independencia del pueblo de Rhodesia del Sur, y de que se abstengan de apoyar en forma alguna las políticas coloniales que constituyen un crimen de lesa humanidad;

f) Incluya con carácter de urgencia el siguiente tema en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea:

"Actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, África Sudoccidental, los Territorios bajo administración portuguesa y otros Territorios coloniales";

g) Pida al Secretario General que dé la mayor publicidad posible al contenido de este informe y a las decisiones de las Naciones Unidas sobre esta cuestión.

D. Aprobación del informe

103. El Subcomité aprobó el presente informe en su 31a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 1966. El representante de Dinamarca declaró que su delegación no podía apoyar las recomendaciones que figuran en los incisos a) y f) del párrafo 102^b.

Apéndice I

[A/AC.109/L.332/Add.1]

La economía de Rhodesia del Sur, con particular referencia a los intereses extranjeros

INDICE

	Párrafos
I. ESBOZO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE RHODESIA DEL SUR	
A. Superficie y población	1-11
B. Recursos naturales	12-18
C. Reseña histórica del desarrollo económico	19-39
D. El desarrollo en los últimos años	40-52
E. Situación actual	53-56
II. LA TIERRA	
A. Legislación sobre tierras	57-90
B. Distribución de las tierras	91-98

^b La declaración del representante de Dinamarca figura en el documento A/AC.109/SC.2/SR.31.

INDICE (continuación)

	Párrafos
III. AGRICULTURA	
A. Características generales	99-108
B. Tabaco	109-117
C. Azúcar	118-134
IV. MINERÍA	
A. Generalidades	135-146
B. Oro	147-175
C. Amianto	176-185
D. Cromo	186-196
E. Carbón	197-203
F. Cobre	204-213
G. Hierro	214-216
H. Litio	217-222
I. Estaño	223-226
V. LA INDUSTRIA SECUNDARIA	
Introducción	227-231
A. Industrias principales y algunas de las empresas que las explotan	232-272
B. Association of Rhodesian Industries (ARNI)	273-274
C. Association of Chambers of Commerce of Rhodesia (ACCOR)	275
D. Transporte y energía	276
VII. COMERCIO EXTERIOR	
A. Generalidades	277-279
B. Actividad comercial, por grupos de mercaderías	280-284
C. Origen de las importaciones y destino de las exportaciones: lista selecta	285-286
D. Origen de las importaciones y destino de las exportaciones: comercio con todos los países	287
E. Comercio con determinados países	288-304
VII. MANO DE OBRA	
A. La legislación del trabajo	305-334
B. Salarios	335-340
Anexo. COMPAÑÍAS FINANCIERAS	1-68
I. ESBOZO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE RHODESIA DEL SUR	

A. Superficie y población

1. Rhodesia del Sur tiene 389.624 kilómetros cuadrados (150.333 millas cuadradas) de superficie que se extiende entre los ríos Limpopo y Zambeze (entre los 15° y 22° de latitud sur y los 26° y 34° de longitud este), al norte del Trópico de Capricornio. Es parte de la gran meseta que constituye una de las principales características de la geografía física del África meridional. Aunque casi todo el país está situado a unos 300 metros de altura y más de 4/5 partes por encima de los 600 metros de altura, sólo menos de una vigésima parte del territorio excede de los 1.500 metros de altura. El panorama, ondulado, sólo se quiebra por algunos grandes valles, por los que corren los ríos y su principal característica es una extensa cordillera, que atraviesa todo el país, de la que emerge el High Veld, faja de altiplanicie de unos 640 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho, a una altura que varía entre 1.200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar.

2. Las tierras bajas de Rhodesia del Sur son las hondonadas por las que corren hacia el este los ríos Zambeze y Limpopo; desde las alturas de la serranía central las tierras bajan hacia aquellos ríos, quebradas a trechos por escarpas abruptas que dominan el Middle Veld, extensa meseta de 900 a 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Los pro-

fundos valles de los ríos dividen el Middle Veld en grandes bloques de meseta de excelentes tierras. Las zonas del Low Veld, relativamente inexploradas, cálidas e inhospitalarias, que se hallan en las hondonadas de las grandes vertientes, están por lo general situadas menos de 900 metros de altura.

3. Cerca de las siete décimas partes de la superficie están formadas por granito, esquistos y rocas ígneas que son la base de la riqueza mineral de Rhodesia del Sur. Este tipo de formación rocosa que suele descomponerse en suelos arenosos o gredosos, cuando forma el subsuelo del High Veld hace que el suelo de Rhodesia del Sur varíe. Las areniscas de estas zonas rara vez producen buenos suelos, porque las lluvias son irregulares y las arenas del extremo oeste no son por lo general aptas para la agricultura ni tienen valor mineral.

4. La cordillera central de Rhodesia del Sur forma la cuenca hidrográfica principal del Territorio y las aguas fluyen siguiendo cursos aproximadamente paralelos, en ambas laderas, hacia el Zambeze, el Limpopo y el Sabi y van a dar al Océano Índico. La corriente de los ríos, que refleja el carácter estacional de las lluvias, es, en la mayoría de los casos, irregular y obstaculiza la navegación en las grandes vías fluviales. Por lo general, la corriente de los ríos es demasiado irregular como para que puedan trazarse grandes planes hidroeléctricos, excepto en las montañas orientales y en el Zambeze.

5. Aunque la meseta se halla situada al norte del Trópico de Capricornio, su altura ha dado a Rhodesia del Sur uno de los mejores climas del mundo: entre templado y cálido, comparable al del Mediterráneo o al de California. A lo largo de la cordillera central el clima es agradable y saludable y las lluvias suficientes para la agricultura. Por lo general, en Rhodesia del Sur la temperatura desciende y las lluvias aumentan con la altura y varía entre el frío y la humedad de las montañas orientales y los valles cálidos y secos del Zambeze, Limpopo y Sabi. La principal zona de desarrollo es el High Veld. Las zonas bajas del Middle Veld, cálidas y secas, están en su mayoría habitadas por africanos, y el clima del Low Veld es por lo general cálido y malsano. En las hondonadas se dan con frecuencia el paludismo y la enfermedad del sueño.

6. Sólo a lo largo de la cadena central las lluvias son lo bastante intensas como para que prosperen los pastos propios de las zonas templadas y de las sabanas. El oeste y el sur, sin lluvias suficientes, son regiones semiáridas, con algunos matorrales y acacias raquíticas. En las alturas orientales (Eastern Highlands), la lluvia es suficiente como para que prosperen árboles tropicales, exóticos, de hojas perennes, fuente valiosa de maderas duras; en las zonas más altas, la vegetación se convierte en montañosa, y en las riberas de los ríos hay bosques de árboles de hojas perennes^a.

7. Ya se ha hablado brevemente de las condiciones del clima. A pesar de que el territorio está situado al norte del Trópico de Capricornio, la meseta se halla a una altura general que da al clima, en realidad, condiciones subtropicales. En la meseta hay heladas invernales. Las lluvias, que se producen principalmente en el verano, de noviembre a marzo, obedecen a las penetraciones de aire húmedo del este o sudeste, disminuyen de este a oeste y son más copiosas en las alturas. En ciertas zonas montañosas de la frontera oriental, las lluvias llegan por término medio hasta 70 pulgadas al año; en Salisbury, en el nordeste, las lluvias llegan hasta 33 pulgadas y en Bulawayo, en el sudoeste, sólo a 23 y, en cambio, en Beitbridge, en el valle del Limpopo, sólo llegan a 12 pulgadas. Las precipitaciones pluviales no son regulares sino bastante variables.

8. La población total de Rhodesia del Sur se calcula, el 31 de diciembre de 1964, en 4.210.000 personas; de éstas, 3.970.000 (94,3%) eran africanos; 7.900 (0,2%) asiáticos; 217.000 (5,3%) europeos y 12.400 (0,3%) de color.

9. Se cree que entre la población africana (que en 1960 se calculaba en 300.000) hay muchos trabajadores migrantes

^a La descripción precedente está tomada del *Handbook to the Federation of Rhodesia and Nyasaland* publicado en 1960 por el Departamento Federal de Información.

procedentes de Zambia, Malawi y otros países, número que va en disminución. La tasa de crecimiento natural de la población africana se calcula en 3,5% anual.

10. Hasta 1962 la población europea aumentó rápidamente, sobre todo debido a la inmigración. En 1963 y 1964 hubo una disminución, por emigración, de unos 12.000 europeos y una disminución neta de 7.000 habitantes europeos. La tendencia se invirtió en el primer semestre de 1965 y hubo un aumento de 2.500 habitantes, que se debió principalmente a la inmigración procedente de Sudáfrica. El Gobierno tiene por política seguir alentando, a base de selección, un gran aumento en la corriente de gente emprendedora que tenga capital o aptitudes a fin de que se radiquen donde hay escasez de población. La población europea de Rhodesia del Sur procede, sobre todo, de Sudáfrica o de Gran Bretaña.

11. El 31 de diciembre de 1964, la población de las ciudades principales y de los suburbios de éstas se calculaba en unas 690.000 personas, 512.000 de ellas africanas, 164.000 europeas y 16.000 asiáticas y de color.

B. Recursos naturales

12. Desde el punto de vista del potencial agrícola, las autoridades gubernamentales han dividido al territorio en cinco regiones:

a) La región boscosa y húmeda, de la frontera oriental, adecuada para bosques, la producción intensiva de ganado y las plantaciones de té y café (región que comprende el 1,56% del Territorio);

b) Una región, subhúmeda, de vegetación arbórea, principalmente en el nordeste de la meseta, apropiada para la producción intensiva de cereales y cultivos comerciales (tabaco, sobre todo) y carne y productos lácteos (18,68%);

c) Una sabana, subárida, situada principalmente en la parte central y suboccidental de la meseta, apropiada para diversos cultivos semiintensivos (17,43%);

d) Una sabana árida que comprende principalmente tierras menos altas, apropiadas para la producción semiintensiva de carne y para ciertos cultivos resistentes a la sequía (33,03%);

e) Una sabana subdesértica, que se extiende principalmente por el Low Veld que, como carece de riego, sólo es apropiada para la producción de ganado (26,20%). Por último, hay un 3,10% de la superficie del territorio que se considera incultivable.

13. En Rhodesia del Sur sólo hay unas cuantas reliquias dispersas de bosques verdaderamente nativos, pero hay extensas sabanas de importancia económica restringida pero bastante definida.

14. Aunque se ha reducido mucho la vida animal de Rhodesia del Sur, la fauna del territorio tiene aún gran interés científico, pintoresco y económico.

15. Como una gran parte del territorio es demasiado seca para la agricultura, el posible empleo del agua para riego tiene gran importancia. Los estudios indican que hay unas 15.000 millas cuadradas de tierras que pueden ser regadas principalmente en las cuencas del Sabi y del Limpopo, al sudeste del territorio. En esa región, y también en el valle del río Zambeze, se llevan a efecto grandes planes de riego.

16. La principal fuente de energía hidroeléctrica, que el Territorio comparte con Zambia, son las aguas del Zambeze que, embalsado en Kariha, tiene actualmente una capacidad generadora de 705 megavatios y una capacidad potencial de 1.600 megavatios. No se sabe que haya petróleo en el Territorio, pero está comprobado que hay yacimientos considerables de carbón de buena calidad, en Wankie, al oeste del Territorio, que se explotan desde los primeros tiempos del desarrollo de los ferrocarriles, pero en los últimos años con menos intensidad debido al incremento del empleo de aceites combustibles importados y porque se dispone de energía hidroeléctrica más barata.

17. La colonización europea de Rhodesia del Sur se produjo en la creencia de que abundaban allí los minerales y, en

particular, el oro. Ha habido una producción regular de oro durante muchos años pero el Territorio nunca fue gran productor de este metal ni se prevé que llegue a serlo en lo futuro. Rhodesia del Sur tampoco tiene los extensos y copiosos yacimientos de cobre que se encuentran en Zambia y en el Congo. Sin embargo, hay una producción apreciable de cobre y también de asbesto y cromo, que se exportan. Además, se dice que en Rhodesia del Sur hay grandes reservas de mineral de hierro, carbón, sal, azufre y otros minerales necesarios para industrias pesadas. Ya se ha establecido una pequeña industria, entre otras, de hierro y acero.

18. Desde el punto de vista del desarrollo económico, el Territorio tiene la desventaja de hallarse a gran distancia de los mercados mundiales y necesita transportar lo que exporta a través de territorios vecinos antes de embarcarlo. Lo reducido de la población es otro obstáculo a la industrialización del país. Sin embargo, las características naturales del país presentaron pocas dificultades al trazado de líneas ferroviarias que llevan a puertos adecuados y a países vecinos. Se abrió así un mercado de mayor magnitud que ha facilitado un considerable desarrollo industrial.

C. Reseña histórica del desarrollo económico

19. En la segunda mitad del siglo XIX habitaban en Rhodesia del Sur dos grupos principales de africanos, pertenecientes ambos al grupo de los bantús. El grupo más antiguo, el de los mashonas, había estado en Rhodesia desde hacía siglos. Al principio tuvieron un régimen político poco estricto y relativamente desarrollado y una economía pastoril, pero practicaban además la agricultura de subsistencia y, hasta cierto punto, explotaban los yacimientos minerales. El segundo grupo, el de los matabeles (*ndebeles*), era una rama rigidamente organizada y militarmente poderosa de los zulúes que, en el tercer decenio del siglo XIX, invadieron por el sur la actual Rhodesia del Sur, llevaron una existencia enteramente pastoril en el sudoeste del Territorio y llegaron a implantar su hegemonía militar y política sobre los mashonas del nordeste.

20. El misionero Robert Moffat visitó al Rey de los matabeles en 1829 y, cerca de la corte de aquél, en Bulawayo, se estableció en 1857 una filial de la Sociedad Misionera de Londres. Además de los misioneros, visitaron el Territorio, años después, cazadores y buscadores de minerales, que adquirieron una idea un tanto exagerada de la abundancia de oro. En 1887 buscadores de concesiones asediaban a Lobengula, Rey de los matabeles, al que convencieron de que concertara un tratado con un emisario del Presidente Kruger del Transvaal, que había abierto su país a los colonizadores boers. Las autoridades británicas, por insistencia de Cecil Rhodes que por aquel entonces empezaba a adquirir el control de la industria de extracción de diamantes en Sudáfrica, enviaron un representante a Lobengula, que desconoció el primer tratado y firmó otro con los británicos, por el cual se comprometía a no tener tratos con ninguna Potencia extranjera sin el asentimiento de las autoridades británicas. Al año siguiente, C. D. Rudd, representante de Rhodes, obtuvo una concesión en que se establecía que, a cambio del pago de 1.300 libras esterlinas, la entrega de 1.000 fusiles modernos, 100.000 cartuchos y un vapor armado, Lobengula concedía a Rudd y a sus asociados la custodia completa y exclusiva de todos los minerales que se hallasen en sus dominios y, además, plenos poderes para hacer cuanto juzgasen necesario para obtenerlos. Sobre la base de la concesión Rudd y junto con otros que consiguieron concesiones de Lobengula, Rhodes organizó la British South Africa Company y obtuvo carta real para desarrollar la región septentrional del Transvaal y Bechuanía que se halla al oeste de los territorios portugueses. En virtud de la carta, se autorizaba a la compañía a ejercer las facultades y atribuciones de jurisdicción y gobierno que adquiriese de vez en cuando por concesión, acuerdo, franquicia o tratado.

21. Aunque la concesión Rudd no comprendía el otorgamiento de derechos sobre tierras y, entre tanto, había sido desconocida por Lobengula, Rhodes se apresuró a organizar

una "Pioneer Column", de unos 187 colonizadores europeos y 150 servidores africanos y, además, unos cuantos centenares de mercenarios, a los que se llamó "La Policía británica de África del Sur", que se trasladaron a Mashonalandia y establecieron una colonia en Salisbury en septiembre de 1890. A los primeros colonizadores se los atrajo con la promesa de quince concesiones de explotación de minas de oro y de unos 3.000 acres de tierra para cada hombre. Un año más tarde, un alemán llamado Lippert, que obraba secretamente en nombre de Rhodes, consiguió de Lobengula el derecho exclusivo, por el término de cien años, para hacer concesiones de tierras a europeos, tanto en Matabelelandia como en Mashonalandia.

22. En julio de 1893, después de las incursiones de guerreros matabeles en Mashonalandia, el Dr. Jameson, administrador de las propiedades de la Compañía, encabezó una pequeña fuerza contra Lobengula y los matabeles. La fuerza se componía, principalmente, de voluntarios reclutados entre los colonizadores, a quienes, por el Acuerdo de Victoria, se les habían prometido más de seis mil acres de tierra, veinte concesiones de explotación de oro y, distribuida por partes iguales, la mitad del "botín", y otras ventajas, si participaban en la expedición. Los matabeles fueron derrotados rápidamente y Lobengula murió de viruela cuando trataba de entablar negociaciones de paz. Después de la muerte de Lobengula la Compañía se apoderó por derecho de conquista de las tierras de los matabeles y confiscó gran parte del ganado de aquéllos. Se establecieron reservas insuficientes de tierras para los habitantes africanos a quienes, como en Mashonalandia, se les permitió seguir siendo "ocupantes de hecho" de tierras que ya habían sido enajenadas. Sin embargo, un impuesto sobre chozas, de 10 chelines por año, estimulaba a los varones adultos a trabajar en las nuevas haciendas y explotaciones mineras.

23. Sin embargo, los africanos resentidos por esa situación, que se agravó a causa de las grandes pérdidas de ganado ocurridas con motivo de una epidemia de peste bovina, se rebelaron en 1896 y se produjo, primero, el levantamiento de los matabeles y, después, el de los mashonas. En momentos en que la fuerza de policía de la Compañía acababa de ser capturada, con ocasión de la fracasada incursión de Jameson en el Transvaal, los levantamientos se reprimieron con cierta dificultad y sólo después de la intervención personal de Rhodes en las negociaciones de paz. La Compañía se evitó así un largo período de guerra de guerrillas, pero así y todo, se hallaba en difícil situación financiera. No sólo había hecho grandes gastos administrativos y militares sino que estaba acometiendo una gran empresa, en particular, la de la construcción de un ferrocarril, por difícil terreno, desde Beira hacia Salisbury y de una segunda línea del norte de la Colonia de El Cabo, por Bechuanalandia, hacia Bulawayo. Iba a establecerse también en la que por aquel entonces se llamaba Rhodesia del Noroeste y Rhodesia del Nordeste. Las esperanzas de rápido éxito financiero de la Compañía se fundaban en el descubrimiento de abundantes yacimientos de oro, pero hasta entonces sólo se había obtenido una pequeñísima cantidad del metal (en total, por valor de 20.700 libras esterlinas, en 1898) y los estudios del geólogo de la Compañía no eran alentadores. El mercado para la producción agrícola de los europeos se reducía, por la falta de transportes, a las necesidades de la minúscula industria de explotación del oro.

24. La Compañía, cuyas responsabilidades administrativas se hallaban bajo una vigilancia bastante estrecha de las autoridades británicas, vendió otras acciones y dio impulso a sus actividades de desarrollo con la esperanza de obtener resultados a largo plazo. El ferrocarril a Bulawayo quedó concluido en 1897 y el que llevaba a Salisbury en 1899 y ambos quedaron unidos tres años después. El mejoramiento del transporte facilitó la importación de maquinaria pesada para la explotación minera y la producción de oro aumentó rápidamente. La comunidad agrícola europea se favoreció por el crecimiento del mercado y por la asistencia técnica que le facilitó la Compañía que, en el decenio que precedió al estallido de la primera guerra mundial, introdujo el tabaco

como cultivo comercial adecuado para la exportación. El número de europeos en Rhodesia del Sur había aumentado de los 1.500 que se calculaban en 1891 a unos 11.000 en 1901 y a 23.700 en 1911.

25. Los derechos administrativos de la Compañía que, conforme a su carta, se extendían a un período inicial, de 25 años, que se vencía en 1914, fueron prorrogados por diez años más. Sin embargo, la Compañía se vio pronto envuelta en una controversia con los colonos europeos, que desde 1907 tenían mayoría en el Consejo Legislativo, y con la Corona Británica, por la propiedad de las tierras sin enajenar, lo cual quería decir, en las circunstancias particulares de Rhodesia del Sur, tierras no reservadas ni concedidas a los indígenas ni concedidas a las compañías y colonos. El Gobierno británico sometió la cuestión a la consideración del Comité Judicial del Privy Council que, en 1918, sostuvo que la propiedad de las tierras correspondía a la Corona por derecho de conquista, aunque la Compañía, en calidad de agente de aquélla en la obra de conquista y administración posteriores, tenía derecho a vender las tierras mientras fuera autoridad administradora y a destinar el producto de la venta a sufragar gastos administrativos.

26. Después de ese fallo, la Compañía se negó a hacer nuevas inversiones de capital para el desarrollo del Territorio y trató de desentenderse de sus obligaciones administrativas. Al mismo tiempo, los colonos europeos habían prosperado mucho gracias al aumento de la demanda de exportaciones originado por la primera guerra mundial. Las exportaciones de minerales sólo habían aumentado de 3.883.000 libras en 1914 a 4.451.000 libras esterlinas pero comprendían ya buena cantidad de carbón, asbesto, cromo y cobre, además de oro. Las exportaciones de productos agrícolas se habían quintuplicado en el mismo período, hasta llegar a un valor de 1.483.000 libras esterlinas, constituido, principalmente, por los envíos de ganado vacuno a Sudáfrica, pero también por maíz, tabaco y frutas cítricas. Los colonos insistían tenazmente en la implantación del gobierno propio. Después de una encuesta oficial, se celebró un referéndum, en que hubo 8.744 votos en favor de la implantación del gobierno propio y 5.989 en favor de la unión con Sudáfrica; Rhodesia del Sur quedó oficialmente incorporada como colonia británica el 12 de septiembre de 1923, y el 16 de octubre del mismo año se le concedió una constitución con arreglo a la cual los colonos obtuvieron el gobierno propio. La población se componía entonces de unos 900.000 africanos, 36.000 europeos y 3.400 asiáticos y personas de color. (Nominalmente, la Asamblea Legislativa, ante la cual era responsable el Gobierno, se elegía sobre una base no racial, pero las condiciones relativas a ingresos y propiedad que se requerían para ejercer el derecho de sufragio excluían a casi todos los africanos.) A la solución política se llegó simultáneamente con una solución financiera, conforme a la cual la British South Africa Company desistía de toda reclamación financiera a la Corona por los déficit administrativos que había experimentado hasta entonces, a cambio de un pago de 3.750.000 libras esterlinas, que el tesoro británico daría en efectivo, cantidad a la que contribuirían las nuevas autoridades de Rhodesia del Sur con 2 millones de libras esterlinas. Se garantizaron los derechos de explotación de minas que tenía la Compañía que, además, recibió garantías, en particular, respecto a sus inversiones en ferrocarriles.

27. El nuevo gobierno prestó especial atención al fomento de los intereses de la comunidad agrícola y al estímulo de la inmigración procedente de la Gran Bretaña. En 1924 se estableció un banco agrario para facilitar el crédito agrícola. En esa época el tabaco prometía llegar a ser un buen producto de exportación y la producción aumentó de 3.900.000 libras en 1923 a 24.900.000 libras en 1928. La industria del tabaco contó entonces con la ventaja que le ofrecían los almácenos cooperativos y los sistemas de comercialización y distribución, de la preferencia que se le acordaba en el mercado británico y de la participación directa de las compañías tabacaleras británicas en el comercio de exportación. El desarrollo de la explotación minera era mucho más lento y, en realidad, la producción de oro disminuyó temporalmente a la

vez que hubo cierta expansión de la producción de carbón y otros minerales básicos.

28. Mientras aumentaba la actividad agrícola, se volvió a considerar la cuestión de las tierras. En 1920, las reservas autóctonas, establecidas a principios de siglo, seguían teniendo una superficie fija de unos 21 millones de acres, o sea 23% de la superficie del Territorio; las tierras de propiedad de los europeos abarcaban 31 millones de acres, o 32%, y los 42 millones de acres restantes, o 45% de la superficie del país, eran tierras de la Corona, que podían venderse a personas de cualquier raza. A pesar de la escasa capacidad adquisitiva de la población africana en su conjunto y de la tradición de propiedad comunal antes que individual de la tierra, los africanos tenían comprados en 1925 unos 45.000 acres. En la población europea surgió entonces la oposición a que se entremezclaran tierras de propiedad de europeos y de africanos. A raíz de un informe de la Real Comisión y con aprobación del Gobierno británico, la primera *Land Apportionment Act* fue sancionada en 1930 y tuvo por consecuencia una rigurosa segregación racial, conforme a la cual se asignó a los europeos más del 50% de Rhodesia del Sur y los africanos perdieron el derecho de adquirir tierras, salvo en una extensión limitada (7.500.000 acres). Hay que advertir que en los momentos en que se sancionó la ley, más de la tercera parte de los africanos del Territorio vivían en explotaciones agrícolas de europeos o en tierras de la Corona asignadas a futuras compras de europeos. Se exigía a los africanos que vivían en las fincas que se trasladaran a las reservas, a menos que celebraran contrato para proporcionar mano de obra a cambio del derecho de ocupación.

29. Durante la gran crisis, los intereses europeos en Rhodesia del Sur sufrieron severísimamente. Desapareció prácticamente el mercado de tabaco, la producción de maíz disminuyó radicalmente, lo mismo que la de la mayoría de los minerales básicos, y las compañías ferroviarias pasaron por graves dificultades económicas. La inmigración quedó virtualmente paralizada. Pero la comunidad de agricultores europeos recibió considerable ayuda del Gobierno, que se calculó en un millón de libras esterlinas, aproximadamente, en el período de 1928 a 1933, mediante préstamos, condonación de deudas, primas de exportación, etc. También se constituyeron juntas de estabilización para mantener los precios de los productos agrícolas.

30. La *Industrial Conciliation Act*, de 1934, que dio fuerza legal a la "discriminación por motivos de color", protegía los intereses de los sindicalistas europeos. El Ministerio de Trabajo quedó legalmente facultado para hacer cumplir los acuerdos celebrados entre patronos y empleados, término que excluía a los "autóctonos". En efecto, en virtud de esos acuerdos se impedía a los africanos el acceso a puestos calificados o el competir, en materia de salarios, con los obreros europeos en general.

31. El Gobierno de Rhodesia del Sur aprovechó la situación de crisis de la industria minera para comprar en 1933 los derechos que en materia de minerales tenía la British South Africa Company, por 2 millones de libras esterlinas. La compra resultó un buen negocio, pues la extracción de oro no sólo se recuperó rápidamente, después de la desvalorización de la libra, en 1931, sino que toda la industria minera se rehabilitó y continuó creciendo regularmente aunque no tan espectacularmente como la de Rhodesia del Norte.

32. A mediados del decenio de 1930 empezó una recuperación general de la economía aunque algo restringida. Las ventas de tabaco, que se celebraban en subastas bien organizadas en Salisbury, ascendieron a 25 millones de libras en 1938, o sea, menos que la cifra correspondiente a 1928, pero produjeron más de 1 millón de libras esterlinas a los 493 cultivadores. Se empezó a exportar carne congelada al Reino Unido. La recuperación económica dio lugar al aumento de la inmigración y la población europea llegó a unos 61.000 habitantes en 1938.

33. La segunda guerra mundial proporcionó al Territorio un mercado garantizado para sus productos de exportación. Al

mismo tiempo, a causa de las dificultades de importación, el Gobierno tomó las primeras medidas para establecer la industria del hierro y del acero, y la de hilados de algodón. Se desarrollaron rápidamente otras industrias incipientes, de manera que el producto industrial bruto aumentó de 5.100.000 libras esterlinas en 1938 a 31.300.000 libras esterlinas en 1949. Las nuevas industrias dependían principalmente de la fuerza de trabajo africana urbana, que iba en aumento. Los obreros africanos organizaron sindicatos a los que no se les reconocía, sin embargo, personería legal, aunque se constituyeron un departamento de mano de obra indígena y una junta asesora de mano de obra indígena. Por otro lado, la reforma de la *Industrial Conciliation Act*, de 1945, mantuvo, en efecto, la discriminación por motivos de color contra el ingreso de africanos en trabajos calificados. Y con el rápido crecimiento de la población africana, se agravó el hacinamiento en las reservas.

34. Para los africanos que permanecían en las zonas "indígenas", el gobierno organizó servicios de divulgación que, no obstante ser menos completos que los establecidos para agricultores europeos, permitieron la formación de una pequeña clase de "maestros agricultores", productores de cultivos comerciales en tierras de propiedad individual. Las tentativas que conforme a la *Native Husbandry Act*, de 1951, se hicieron para imponer mejores métodos de producción en las reservas indígenas propiamente dichas, no modificaron sustancialmente la agricultura de subsistencia.

35. En los primeros años de la posguerra hubo una corriente inmigratoria, procedente en su mayor parte de la Gran Bretaña y de Sudáfrica, alentada empeñosamente por el Gobierno de Rhodesia del Sur. La población europea aumentó de 83.500 habitantes en 1946 a 125.000 en 1950 y a 158.000 en 1954. En el Territorio se establecieron muchas empresas comerciales nuevas porque la perspectiva de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia parecía encerrar la promesa de un mercado más vasto y de un desarrollo económico aún más rápido. La gran compañía minera Rhodesian Anglo-American y empresas asociadas, aunque trabajaban, principalmente, en la zona del cobre de Rhodesia del Norte, trasladaron sus centrales de Londres a Salisbury en 1950, y en 1955 hizo lo mismo el Rhodesian Selection Trust. (Estas empresas acaban de trasladar sus centrales a Zambia.) Salisbury se convirtió, por tanto, en importante centro comercial y financiero.

36. En 1947 el Gobierno compró los ferrocarriles de Rhodesia por unos 30 millones de libras esterlinas. Con esto se produjo la nacionalización final de las actividades de desarrollo de la British South Africa Company en el África meridional. La compañía siguió manteniendo inversiones, en Rhodesia del Sur, en esferas tales como explotaciones forestales, haciendas de ganado, producción de frutos cítricos, hornos y molinos harineros y, más tarde, en la producción de ferrocromo y de hierro y acero. Todas estas empresas, sin embargo, no representan más que una pequeña proporción del total de sus haberes. La misma empresa calculaba que sus inversiones (en las que presumiblemente hay que contar intereses considerables en otros lugares de la Federación) llegaban el 30 de septiembre de 1963 a 7.100.000 libras esterlinas y que sus inversiones en el mundo ascendían, en total, a 66.400.000 libras esterlinas^b.

37. Aunque el Gobierno de Rhodesia del Sur compró los ferrocarriles, la red de éstos se extiende tanto a Rhodesia del Norte como a Bechuania y la administración tiene que dar cuenta a una autoridad superior que, durante el período de existencia de la Federación, fue el Ministerio Federal de Transporte y que forman hoy día representantes ministeriales de los Gobiernos de Zambia y Rhodesia. El embotellamiento en el puerto de Beira, por el que pasa la mayor parte del comercio exterior, tanto de Rhodesia del Norte como de Rhodesia del Sur y Nyasalandia, era un obstáculo grave al desarrollo de los territorios en el período que siguió inmediatamente a la posguerra. En 1949 se dio principio a la construcción de una línea para unir la red del ferrocarril de Rhodesia,

^b Véase en el anexo la reseña detallada de las actividades de la British South Africa Company, que hoy se llama Charter Consolidated.

cerca de Bulawayo, con el puerto de Lourenço Marques. La nueva línea, junto con las mejoras de los puertos de Beira y Lourenço Marques y la renovación y mejoramiento del material rodante, permitió eliminar la congestión. La carga transportada por los ferrocarriles de Rhodesia aumentó de 2.920.000 toneladas en 1938/1939 a 5.097.000 toneladas en 1957/1958. En 1946 se establecieron las líneas aéreas Central African Airways como empresa conjunta de los tres gobiernos.

38. La Federación de Rhodesia y Nyasalandia empezó a actuar en los últimos meses de 1953. En lo económico, tuvo por consecuencia el que se traspasara a las autoridades federales, salvo excepciones de menor importancia, toda la administración de la vida económica de los territorios unidos. Sin embargo, a pesar de ciertas disposiciones sobre representación de los intereses africanos, los requisitos de ingreso y propiedad para el ejercicio del derecho de sufragio en elecciones federales, excluían de éstas a casi todos los africanos. Por lo tanto, el poder político se hallaba en manos de los votantes europeos y el Gobierno seguía la misma política de alentar la inmigración europea y las inversiones extranjeras en el Territorio que practicaba el Gobierno de Rhodesia del Sur antes de implantarse la Federación. Parece que, en definitiva, la Federación fue particularmente favorable para el desarrollo de la economía europea de Rhodesia del Sur. Las minas de cobre de Rhodesia del Norte fueron, con mucho, el renglón de producción y fuente de ingresos fiscales más valiosos de la Federación. Sin embargo, los ingresos se invirtieron en el desarrollo de la Federación en su conjunto pero de una forma tal que no perjudicó de ningún modo a Rhodesia del Sur. Además, la base, más amplia, y el mercado, más vasto, que ofrecía la Federación como un todo, sin duda atrajo a los que estaban dispuestos a prestar dinero a las autoridades públicas y a los que estaban dispuestos a invertirlo en empresas privadas. Por último, los que querían establecer empresas comerciales en la Federación comprobaron que el lugar natural para ello era Rhodesia del Sur, que tenía una economía más diversificada, mejores servicios financieros y fuerza de trabajo más calificada.

39. Por eso los diez años de Federación fueron para Rhodesia del Sur años de rápido crecimiento, más al principio

que al final del decenio. El éxito más notable de la Federación fue la construcción de la represa de Kariba e instalaciones hidroeléctricas afines, cuya primera parte, en las riberas del Zambeze correspondientes a Rhodesia del Sur y que empezó a funcionar en 1960, tiene 705 megavatios de capacidad. Las líneas de transmisión que unen a Kariba no sólo con la zona cuprífera de Zambia — que sigue siendo el principal usuario — sino también con las zonas principales de población europea de Rhodesia del Sur, suministraron en 1964, 1.717 millones de los 2.050 millones de kilowatios hora consumidos, cifra que en 1954 fue sólo de 869 millones de kilowatios por hora. Los medios de financiación del proyecto se obtuvieron por préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (28.600.000 libras esterlinas); de la Colonial Development Corporation, del Reino Unido (15 millones de libras esterlinas); la Commonwealth Finance Development Company que agrupa a algunos de los más grandes intereses en la explotación minera (3 millones de libras esterlinas) y empréstitos generales emitidos por el Gobierno federal (34 millones de libras). La energía barata suministrada de ese modo ha estimulado el desarrollo económico y alentado, en particular, proyectos tales como el de las fundiciones de ferrocromo de Gwelo y las plantaciones de caña de azúcar de Chirundu, en el Zambeze, donde el agua para el riego se bombea por medio de la electricidad. En cambio, la disminución del empleo del carbón para generar electricidad y la implantación gradual de los motores diesel en los ferrocarriles de Rhodesia han tenido como consecuencia la reducción de la producción de la cuenca carbonera de Wankie.

D. El desarrollo en los últimos años

40. Desde el principio del período federal se ha dispuesto de estadísticas detalladas del ingreso nacional, tanto para la Federación en su conjunto como para Rhodesia del Sur, que permiten mostrar en forma de cuadros el desarrollo de la economía. Anteriormente, las estimaciones con menos detalle estadístico del ingreso nacional daban las cifras de 28.900.000 libras en 1939 y 73.600.000 libras en 1949. Las cifras correspondientes al producto nacional bruto de Rhodesia del Sur, por origen industrial, para 1954, 1959, 1963 y 1964 son las siguientes:

	1954	1959	1963	1964
	<i>(En millones de libras)</i>			
Agricultura: i) De los no africanos	23,7	33,8	44,2	46,3
ii) De los africanos, incluso los cultivos de subsistencia	14,6	16,9	19,6	21,4
TOTAL de la agricultura	38,3	50,7	63,8	67,7
Explotación de minas y canteras	14,5	17,2	15,8	16,9
Manufacturas	24,6	41,8	51,2	54,3
Edificación y construcción	13,2	21,3	13,9	13,5
Electricidad y agua	4,0	7,3	13,2	13,7
Distribución	23,4	36,8	40,9	41,5
Transportes y comunicaciones	12,3	23,5	28,7	30,9
Administración pública y defensa	6,5	11,4	15,6	14,6
Educación y sanidad	4,8	9,2	14,2	14,6
Otros conceptos	26,3	45,7	51,8	52,7
Producto interno bruto al costo de los factores....	167,9	264,9	309,1	320,4
Menos el ingreso neto pagado en el extranjero	6,1	10,6	15,1	—14,7
Producto nacional bruto al costo de los factores....	161,8	254,3	294,0	305,7
Más los impuestos indirectos y menos los subsidios	8,1	15,9	22,2	26,0
Producto nacional bruto a precios de mercado corrientes	169,9	270,2	316,2	331,7
Producto nacional bruto a precios de mercado de 1954	169,9	231,7	248,3	352,4

FUENTE: *National Accounts and Balance of Payments of Rhodesia, 1954-64* (Cuentas nacionales y balanza de pagos de Rhodesia, 1954-64).

41. Se observará que la tasa de crecimiento económico fue mucho mayor hasta 1959 que en el período siguiente. En realidad, desde 1961 el crecimiento económico del ingreso nacional a precios constantes viene siendo muy pequeño. Las estadísticas muestran que la formación bruta de capital fijo (la mitad de la cual, aproximadamente, corresponde al sector privado) se elevó desde 46.800.000 libras en 1954 hasta un máximo de 84.400.000 libras en 1958, y disminuyó hasta 45.800.000 libras en 1963, aumentando ligeramente (hasta 47.100.000 libras) en 1964. Al parecer, se dirigieron mal algunas de las inversiones más antiguas, y la inseguridad política ha desalentado las inversiones en los últimos años.

42. El ingreso nacional en los años mencionados se distribuyó de la manera siguiente:

	1954	1959	1963	1964
<i>(En millones de libras)</i>				
1. <i>Salarios y sueldos</i>				
No africanos	56,9	96,8	107,5	107,6
Africanos	35,6	57,2	70,9	75,4
TOTAL	92,5	154,0	178,4	183,0
2. <i>Ingresos brutos procedentes de empresas no constituidas en sociedades de capital</i>				
i) Europeos, asiáticos y de color	18,3	25,0	25,6	26,6
ii) Africanos				
a) Hogares rurales				
i) Para el consumo propio	13,4	15,7	20,1	22,0
ii) Para la venta	3,7	4,1	3,4	3,6
b) Otros	0,7	1,8	3,8	4,0
TOTAL	36,1	46,6	52,9	56,2
3. <i>Utilidades brutas de explotación</i>				
i) Empresas del gobierno	2,6	5,8	7,0	7,4
ii) Corporaciones públicas	3,9	7,5	12,6	13,5
iii) Compañías	26,0	39,8	44,7	46,7
TOTAL	32,5	53,1	64,3	67,6
4. Ingresos gubernamentales de las propiedades..	2,0	2,9	3,2	3,4
5. Ingresos personales de las propiedades	4,8	8,3	10,3	10,4
Producto interno bruto al costo de los factores	167,9	264,9	309,1	320,4

43. Los cuadros siguientes muestran el producto interno bruto por habitante, los ingresos medios de los empleados no africanos y africanos, y el ingreso por habitante de los hogares rurales.

	1954	1959	1963	1964
Producto interno bruto (millones de libras).....	167,9	264,9	309,1	320,4
Población total (miles)	2.990	3.520	4.010	4.140
Producto interno bruto por habitante (libras) ..	56,1	75,0	77,1	77,4
Producto interno bruto a precios constantes (libras)	56,8	65,8	61,9	61,0
Salarios y sueldos de los no africanos (millones de libras)	56,9	96,8	107,5	107,6
Número de empleados (miles)	64,4	87,8	88,2	86,8
Haberes medios (libras)	884	1.103	1.219	1.241
Salarios y sueldos de los africanos (millones de libras)	35,6	57,2	70,9	75,4
Número de empleados (miles)	555	628	608	622
Haberes medios (libras)	64	91	116	121
Ingreso por habitante de los hogares rurales.....	12	11	11	11

44. En el cuadro siguiente se dan detalles de las utilidades netas de explotación de las compañías en Rhodesia en los años 1954, 1959 y 1962:

	1954	1959	1962	Número de compañías	Total del activo en 1963 (En millones de libras)
Agricultura	0,3	0,8	1,6	59	21,8
Explotación de minas y canteras..	5,2	5,9	5,2	37	38,2
Manufacturas	5,2	7,2	7,1	116	42,2
Edificación y construcción	0,6	0,9	0,2	7	0,7
Distribución	4,9	5,6	5,6	97	24,3
Banca y seguros*	-0,7	-2,9	-3,7	75	36,0
Propiedad inmobiliaria	0,4	2,3	2,5	51	6,9
Transportes y comunicaciones	0,2	0,7	0,7	16	1,3
Servicios	0,3	1,5	1,3	12	1,2
TOTAL	16,4	22,0	20,5	470	172,7

* Las compañías de banca y seguros presentan pérdidas porque se han excluido los pagos de intereses a las mismas para evitar la duplicación en la contabilidad nacional. En realidad, las compañías de banca y seguros tuvieron 19.500.000 libras de utilidades brutas en 1962.

45. La desaceleración del crecimiento económico durante los últimos años de la Federación se reflejó principalmente en el descenso de la actividad de construcción, el relativo estancamiento de la producción de minerales y la persistencia del bajísimo nivel de producción e ingresos de los africanos que vivían en las reservas. La producción agrícola de los europeos se ha visto afectada por las estaciones y, especialmente en 1965 por lo que respecta al tabaco, por las perspectivas del precio del mercado, pero, según se indica en el cuadro siguiente, la tendencia general de las principales cosechas muestra un notable crecimiento:

TABACO DE VIRGINIA CURADO AL HUMO

	Superficie cultivada (miles de acres)	Producción (millones de libras)	Valor (millones de libras)
1959	203	191,3	27,4
1963	218	194,8	33,8
1964	256	323,8	35,0
1965	No hay datos	245,8	33,8

MAÍZ

AZÚCAR

	Superficie cultivada (miles de acres)	Producción (miles de sacos)	Superficie cultivada (miles de acres)	Producción de caña (miles de toneladas)
1959	349	3.827	8,7	126,8
1963	361	4.414	30,3	904,3
1964	371	4.361	53,6	1.431,5
1965	No hay datos	No hay datos	No hay datos	No hay datos

46. La industria azucarera constituye el aspecto más notable del desarrollo económico de Rhodesia del Sur durante los últimos años, y se explota mediante la colaboración entre grandes inversionistas extranjeros, que han establecido plantaciones modernas y eficientes, y el Gobierno de Rhodesia del Sur, que está construyendo grandes presas para regar una extensa zona del Bajo Veld sudoriental. El Gobierno ha creado la Autoridad del Sabi-Limpopo para que se encargue de la planificación y coordinación de esos trabajos.

47. En el cuadro siguiente se indica el comercio exterior de Rhodesia del Sur en 1953, que fue el último año anterior a la constitución de la Federación, y en 1954, 1959, 1963 y 1964, que fue el año siguiente a la disolución de dicha Federación:

Exportaciones internas					Ventas netas de oro	Reexportaciones	Total de las exportaciones	Saldo visible
Importaciones	A Zambia	A Malawi	A otros países	Total				
(En millones de libras)								
1953	77,7	7,7	0,6	39,1	47,4	6,6	65,4	-12,2
1954	77,7	7,7	0,6	42,9	47,4	6,6	65,4	-12,2
1959	77,7	7,7	0,6	57,4	47,4	6,9	65,4	-12,2
1963	77,7	7,7	0,6	75,1	47,4	7,0	65,4	-12,2
1964	109,7	30,8	5,6	83,1	119,5	7,1	144,5	+34,9

Los principales productos exportados, aparte del oro, fueron los siguientes:

	Tabaco	Asbesto	Carne	Azúcar	Cobre	Hierro bruto	Mineral de de cromo	Ferrocromo
(En millones de libras)								
1954	20,9	6,5	2,9	0	0	0	2,6	0,3
1959	28,1	7,1	3,6	0	0,4	0,5	3,7	1,2
1964	39,2	10,0	5,0	3,7	3,6	2,6	2,5	1,8

48. En 1964, los principales países a los que se dirigieron las exportaciones fueron, después de Zambia, el Reino Unido (30.500.000 libras), Sudáfrica (49 millones de libras) y la República Federal de Alemania (7.900.000 libras)^c. Los principales países de los que se recibieron importaciones fueron el Reino Unido (33.300.000 libras), Sudáfrica (26.700.000 libras), los Estados Unidos (7.400.000 libras) y Zambia (5.400.000 libras)^d. Teniendo en cuenta las transacciones invisibles, la balanza de pagos en cuenta corriente de Rhodesia del Sur arrojaba en 1964 un déficit de 5.300.000 libras. Tenía saldos deudores prácticamente con todas las partes del mundo, salvo con Zambia y Malawi.

49. No se puede comparar el estado de la hacienda pública durante los años de la Federación con el de los años posteriores, a causa de la división de los ingresos fiscales y del destino dado a los mismos. El cuadro siguiente muestra las principales partidas de ingreso y de gasto para el primer semestre de 1964 y para el ejercicio económico de 1964/1965, así como los cálculos presupuestarios para 1965/1966:

	1964 Enero-Junio	1964/1965	1965/1966 (cálculos)
(En millones de libras)			
Ingresos			
Impuesto sobre la renta	3,9	23,2	24,7
Impuesto personal	1,3	2,4	2,5
Aduanas e impuestos sobre el consumo	7,8	16,2	16,7
Impuestos sobre las ventas	1,4	2,5	2,7
Otros impuestos	2,0	4,5	5,2
Intereses, rentas y utilidades	4,3	9,4	9,6
Ingresos de correos y telecomunicaciones ..	2,2	5,2	6,2
Derechos	0,9	2,3	2,5
Otros ingresos	7,5	5,4	3,6
	31,5	71,1	73,7
Gastos			
Asuntos políticos y exteriores	0,3	0,6	0,7
Defensa	2,5	5,9	6,2
Policía	2,5	5,0	5,5
Asuntos interiores	1,0	1,9	2,0
Tesoro (incluso el servicio de la deuda)....	6,0	16,1	15,3
Correos y telégrafos....	1,8	3,5	3,7
Agricultura, conservación, etc.	1,8	3,7	4,0
Minas y tierras	0,4	1,4	1,5
Carreteras	1,4	2,8	2,6
Obras públicas	1,6	2,6	2,5

	1964 Enero-Junio	1964/1965	1965/1966 (cálculos)
(En millones de libras)			
Educación	5,8	5,8	6,1
Educación de los africanos		6,1	6,4
Sanidad	2,9	4,8	5,5
Otros gastos	6,6	10,3	11,8
	33,7	70,7	73,8

50. El déficit que arrojaban las cuentas de ingresos al 1° de julio de 1964 se enjugó casi por entero mediante una subvención de 4 millones de libras del Gobierno británico.

51. Durante 1964/1965, el Gobierno de Rhodesia del Sur obtuvo de fuentes externas 3.600.000 libras, de las que 2.500.000 procedían de un empréstito del Gobierno de Sudáfrica al 5,5% que es el mismo tipo favorable de interés que aplica dicho Gobierno en los préstamos a sus administraciones provinciales. Los empréstitos internos ascendieron a 9.200.000 libras. Después de amortizar empréstitos por un total de 6.500.000 libras en el mismo año, la deuda pública ascendía a 215.800.000 libras, según se detalla a continuación:

	(En millones de libras)
Deuda exterior	
Valores en Rhodesia del Sur (Londres)	69,5
International Bank (Reino Unido) ..	9,7
Colonial Development Corporation..	1,0
Colonial Development and Welfare Fund	3,7
República de Sudáfrica	2,5
Otros conceptos	3,5
TOTAL	89,0
Deuda interna	
Valores de Rhodesia del Sur.....	76,1
Southern Rhodesian Development Bonds (Kariba)	8,8
British South Africa Company....	2,3
Rhodesia Anglo-American Company	1,1
Otros empréstitos y bonos	10,4
Préstamos temporales	27,1
TOTAL	125,8
Volumen total de la deuda pública	215,8

52. Los gastos efectuados durante el ejercicio económico de 1964/1965 con cargo a empréstitos ascendieron a 10.900.000 libras; las partidas principales fueron el servicio de aguas, con 2.100.000 libras; carreteras, con 1.900.000 libras; vivienda, con 1.400.000 libras; y administración local, con 1.200.000 libras. A continuación se ofrece un análisis de los gastos netos efectuados con cargo a los fondos de empréstitos hasta el 30 de junio de 1965:

^c En todas las cifras se excluyen las ventas netas de oro.

^d Muchas de las importaciones de Zambia se reexportan.

<i>(En millones de libras)</i>	
Empréstitos	
Organos de administración local....	30,7
Ferrocarriles de Rhodesia	48,9
Electricity Supply Corporation	20,6
Central African Power Corpora- tion	13,6
Land and Agricultural Bank	10,4
Préstamos para vivienda	9,9
Comisión de cámaras frigoríficas...	4,3
Junta de Comercialización de Granos	4,1
Fondo Africano para el Fomento de la Producción y de la Comercia- lización	1,7
Junta Comercial Lechera	1,6
Inversiones en la Rhodesian Iron and Steel Company	4,3
Otros empréstitos	6,9
Gastos de desarrollo	
Obras públicas	29,6
Carreteras y puentes	21,2
Correos y telégrafos	9,4
Obras hidráulicas y de conservación de tierras agrícolas	7,5
Mejoramiento de las zonas rurales, escuelas, poblados, africanos, etc.	4,9
Otros gastos de desarrollo	7,4
TOTAL	<u>237,0</u>

E. Situación actual

53. La economía de Rhodesia del Sur se distingue por la coexistencia de dos economías: una economía europea de mercado, relativamente desarrollada y diversificada, y una economía africana de subsistencia, rural y deprimida. La primera se ha apropiado de la mejor parte de los recursos naturales del Territorio y los utiliza de manera científica y provechosa. A pesar de las circunstancias de monopolio en que se colonizó al Territorio y de la persistente importancia de los intereses de gigantes financieros como la British South Africa Company, que ha cambiado recientemente su nombre por el de Charter Consolidated, y la Anglo-American Corporation, que han fusionado actualmente sus intereses en Rhodesia del Sur, la propiedad de los recursos está sumamente difundida entre la población europea del Territorio, y quienes no poseen directamente esos recursos tienen acceso a los empleos y a los servicios sociales en condiciones privilegiadas.

54. Los africanos de las zonas rurales no han recibido los beneficios de los servicios de divulgación educativos o agrícolas que les permitirían hacer un uso verdaderamente útil de sus recursos de tierras. Además, con su persistente y rápido crecimiento demográfico, cada vez disponen de menos espacio, y muchas de las tierras que poseen, sufren los efectos de la erosión. Ante la evidente presión demográfica, se ha aumentado el total de las tierras disponibles para los africanos desde menos del 30% hasta más del 45% de la extensión total de las tierras de Rhodesia del Sur, mientras que la extensión reservada para los no africanos se ha reducido desde más del 50% hasta el 38%. Sin embargo, ha continuado la presión demográfica. En particular, se han consumido prácticamente las tierras de la Native Purchase Area (zona de libre adquisición para los indígenas), y hay unos siete mil africanos que han sido capacitados para cultivar tierras de su propiedad individual, pero que no pueden obtener parcelas. Por otra parte, están lejos de usarse en general las tierras reservadas a los europeos, de las que sólo se cultivaba en 1964 un millón de acres. Además, el Gobierno continúa preparando tierras para que se establezcan los europeos. Han fracasado los intentos de lograr la derogación de la *Land Apportionment Act*, debido a que el Gobierno actual ha prometido mantenerla.

55. Grandes cantidades de africanos se han visto obligados a buscar empleo, y la población urbana africana ha aumentado desmesuradamente desde la época de la segunda guerra mundial. Se observará que los trabajadores africanos reciben salarios que vienen aumentando persistentemente, y que se les emplea en actividades cada vez más diversas, debido en parte al progreso general y en parte a que estaban protegidos por la *Industrial Conciliation Act* de 1959, que figura en la estructura de la negociación de contratos colectivos. Sin embargo, el salario medio de los trabajadores africanos no llega aún al 10% del que se paga a los trabajadores europeos. Además, el debilitamiento de la economía en los últimos años ha ocasionado una verdadera disminución de la fuerza de trabajo, con lo que se ha producido bastante desempleo entre los africanos de las ciudades.

56. Por lo tanto, la situación económica actual de Rhodesia del Sur parece reflejar el malestar que existe en la esfera política.

II. LA TIERRA

A. Legislación sobre tierras

Disposiciones principales

57. La *Land Apportionment Act* da carácter legal a una política de segregación basada en el principio general de que los indígenas africanos únicamente pueden adquirir, arrendar u ocupar tierras en una zona indígena, pero no en las zonas europeas, salvo en los casos en que se autorice especialmente.

58. La *Land Apportionment Act*, enmendada en 1941, clasifica todo el territorio de Rhodesia del Sur, a excepción de las tierras tribales en fideicomiso, en la forma siguiente:

a) Una zona europea, en la que se prohíbe a los africanos que posean u ocupen tierras, salvo ciertas excepciones;

b) Una zona indígena, que comprende la zona de libre adquisición por los indígenas, en la que sólo los indígenas africanos pueden poseer u ocupar fincas, con ciertas excepciones, y una zona de poblados africanos, en la que los africanos pueden poseer tierras y otras propiedades; esta última incluye todos los poblados o barrios africanos establecidos en las zonas de libre adquisición por los indígenas, en la zona europea o en las tierras tribales en fideicomiso, si bien los establecidos en la zona europea o en las tierras tribales en fideicomiso re-vierten a dichas zonas si se suprimen los poblados; en las transferencias que afecten a la zona indígena y a la zona europea, se permiten las expropiaciones de tierras u otros derechos;

c) Las tierras nacionales, que se destinan a la explotación forestal, reservas naturales, conservación de la fauna y flora y parques nacionales; las tierras nacionales no pueden enajenarse, aunque pueden arrendarse por períodos de 10 a 99 años;

d) Las tierras no reservadas, que pueden arrendarse a africanos y no africanos, siempre que los primeros sean nacionales o estén considerados por la ley como residentes permanentes en Rhodesia del Sur.

59. Todas las categorías de tierras, a excepción de la zona europea, están definidas por la ley; la zona europea comprende todas las tierras no definidas por la ley.

60. La Constitución de 1961 impide a la Asamblea Legislativa ampliar la zona europea, pero le autoriza a incorporar nuevas tierras a dicha zona a condición de que su superficie total no exceda de la superficie total de la zona en el momento de disolverse la anterior Asamblea.

61. En cuanto a las tierras africanas, la Constitución autoriza a la Asamblea Legislativa a ampliar las tierras tribales en fideicomiso, sin fijar ningún límite, así como la zona de libre adquisición por los indígenas, a condición de que la superficie total de las tierras de esta zona no sea mayor que la suma de las zonas de libre adquisición por los indígenas y de las tierras tribales en fideicomiso en el momento de disolverse la anterior Asamblea.

62. La ley autoriza a los terratenientes de la zona europea y de la de libre adquisición por los indígenas a solicitar que sus tierras se transfieran a la categoría de tierras no reservadas; en tal caso, las tierras propiedad de los europeos pueden venderse a los africanos y las tierras propiedad de los africanos pueden venderse a los europeos. La ley autoriza también al Gobernador, cuando éste lo considere de interés público, a cambiar tierras de la Corona situadas en la zona europea o en tierras no reservadas, por tierras de la Corona situadas en la zona de libre adquisición por los indígenas, siempre que este cambio no afecte materialmente a la superficie total ni perjudique de cualquier modo a las otras tres zonas.

Zonas africanas

a) Tierras tribales en fideicomiso

63. La Constitución confía todas las tierras tribales en fideicomiso a un Consejo de Administración, reservándolas "para el uso y ocupación exclusivos de los indígenas africanos" a reserva de los derechos previamente adquiridos y con la condición de que "el dominio, así como el derecho de prospección, explotación y disposición de todos los minerales, aceites minerales y grasas naturales", corresponde al Gobernador.

64. El Consejo de Administración está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, en calidad de Presidente, un Jefe designado por el Consejo de Jefes, el Presidente de la Junta de Recursos Naturales, y tres miembros designados por períodos de cinco años por el Gobernador, los cuales, de acuerdo con la Constitución, deben ser personas de experiencia en cuestiones financieras, agricultura africana y gobierno local en las zonas tribales, respectivamente. El Consejo no está autorizado a enajenar las tierras tribales en fideicomiso ni los derechos o intereses en los mismos, sino de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución, y debe velar porque dichas tierras se destinen al uso y ocupación exclusivos de los indígenas africanos.

65. A menos que sea en ejercicio de derechos previamente adquiridos, la Constitución prohíbe a las personas que no sean indígenas africanos ocupar ninguna parte de las tierras tribales en fideicomiso, si no es en virtud de un acuerdo concertado con el Consejo de Administración con alguno de los siguientes fines: razones administrativas del Gobierno; motivos religiosos o educativos en interés de los indígenas africanos; para hospitales, dispensarios u otros establecimientos en beneficio de los indígenas africanos; para cementerios o campos de enterramiento; en ejercicio de derechos relacionados con el aprovechamiento de productos forestales u otros recursos naturales de las tierras tribales en fideicomiso; en ejercicio de derechos concedidos por el Gobierno de conformidad con las leyes mineras; para hoteles u otros establecimientos similares destinados a los viajeros; y con otros fines que, a juicio del Consejo, redunden en interés de los indígenas africanos o en interés público.

66. La *Native Land Husbandry Act* de 1951 y la *African Affairs Act* de 1927, en su forma enmendada, imponen restricciones a los propios indígenas africanos en cuanto al uso y ocupación de las tierras tribales en fideicomiso. La primera ley citada tenía por objeto controlar la utilización y asignación de las tierras ocupadas por africanos y asegurar su uso eficiente para fines agrícolas. Dicha ley limita el uso de las tierras tribales en fideicomiso al establecer que "ningún indígena podrá cultivar un terreno de labor a menos que esté registrado como titular de un derecho de explotación agrícola respecto de dicho terreno". Este derecho no puede ser ofrecido ni aceptado como garantía, ni enajenarse por testamento; expira con el fallecimiento del titular y, en determinadas circunstancias, puede ser anulado por el Comisionado de Asuntos Indígenas u otro funcionario competente.

67. De conformidad con la *African Affairs Act* de 1927, en su forma enmendada, la autoridad para asignar las tierras que cada *kraal* debe destinar a chozas, huertos y pastos en las tierras tribales en fideicomiso y para determinar el número mínimo de varones adultos africanos que integran un *kraal*, corresponde al comisionado local del distrito, siempre

que se necesite autorización para que un africano se traslade a un *kraal* o se marche de él. El comisionado del distrito puede asimismo prohibir que se construyan nuevas chozas o que se cultiven nuevos huertos.

68. La ley prohíbe además que un africano se traslade de un distrito a otro sin el consentimiento del comisionado del distrito. También prohíbe a los jefes, que son nombrados por el Gobernador y pueden ser expulsados por éste, por causa justificada, con sus familias y bienes de las tierras tribales en fideicomiso, que abandonen los distritos en que residen sin autorización del comisionado del distrito.

69. La Constitución de 1961 introduce un sistema según el cual, en circunstancias claramente establecidas, se permite por primera vez a los indígenas africanos adquirir como propiedad privada tierras en las zonas tribales sujetas a planes de regadío, y en cualquier zona determinada de las tierras tribales en fideicomiso. Puede concederse la propiedad absoluta sobre estas tierras si el Consejo, después de hacer la investigación oportuna y de consultar con el jefe interesado, se convence de que el deseo general de las personas que viven en cualquier zona considerable de las tierras tribales en fideicomiso es que sus derechos se conviertan en derecho de propiedad individual, y el Consejo estima que esta medida redundaría en interés general. En tal caso las tierras dejarán de ser tierras tribales en fideicomiso y los títulos de propiedad individual estarán sujetos a las limitaciones establecidas en las leyes en cuanto a su futura enajenación.

70. La Constitución de 1961 autoriza además al Gobernador a enajenar tierras tribales en fideicomiso, con el consentimiento del Consejo de Administración, si dichas tierras se necesitan "para fines de explotación minera, defensa, mejora de las comunicaciones u otros fines públicos". En tal caso, se convertirían en tierras de la Corona. La Constitución exige que cualquier africano desposeído de su derecho a ocupar la tierra reciba a cambio otra "en la medida de lo posible y razonable" y, que si no se dispone de otra a cambio, se le pague una indemnización por su traslado y por las mejoras permanentes que hubiese hecho en la tierra, y que, además, se pague una indemnización adicional al Consejo de Administración en beneficio de los demás africanos de la zona correspondiente. Si se asigna una tierra a un africano como indemnización, dicha tierra debe estar situada en un lugar lo más conveniente posible, ser suficiente para sus necesidades agrícolas y de pastoreo y resultar tan adecuada para sus necesidades como la tierra que se le ha expropiado.

71. La Constitución de 1961 permite también la enajenación de tierras tribales en fideicomiso para la creación de poblados, aldeas o centros comerciales destinados a los indígenas africanos.

72. La única otra forma de enajenación de tierras tribales en fideicomiso que autoriza la Constitución de 1961 es la concesión del derecho de propiedad a una persona o compañía que se comprometa a realizar obras de regadío en las tierras tribales en fideicomiso en beneficio de los africanos. Una condición de todas estas concesiones es que la ocupación de la tierra se reservará exclusivamente a los africanos.

b) Zona de libre adquisición por los indígenas

73. La zona de libre adquisición por los indígenas se reserva para los indígenas africanos que respondan a la definición de "africanos descendientes por la línea paterna de un miembro de alguna de las tribus que ordinariamente residen en Rhodesia del Sur".

74. Mientras un europeo que posea tierras en la zona europea puede enajenar su propiedad libremente, excepto a un africano, el africano que posea tierras en la zona de libre adquisición por los indígenas no tiene derecho a enajenar, arrendar, hipotecar o disponer de ellas, a menos que la Junta Rural apruebe tanto las condiciones de la cesión como la persona a cuyo favor se haya de enajenar, arrendar o gravar la tierra. Además, si un africano no cumple las condiciones de su título de propiedad, o si resulta "convicto de traición, sedi-

ción o incitación a cometer estos delitos" el Gobernador puede confiscar sus tierras.

75. Las tierras de la Corona situadas en la zona de libre adquisición por los indígenas pueden ser enajenadas o arrendadas a indígenas africanos por el Gobernador, por recomendación de la Junta Rural, en las condiciones que el Gobernador establezca. Entre las condiciones fijadas figuran la posesión de un título de maestro agricultor o documento similar y un capital de 300 libras esterlinas por lo menos, en efectivo o en especie. El precio de compra lo fija la Junta en consulta con el Ministro de Tierras.

76. Por lo demás, a los africanos se les exige permiso para ocupar tierras de la Corona en la zona de libre adquisición por los indígenas, si bien los africanos que ocupaban estas tierras inmediatamente antes del 1° de noviembre de 1958 están exentos de este requisito. La ocupación de las tierras de la Corona está sometida a las condiciones que establezca el Gobernador.

77. En circunstancias especiales, el Gobernador puede permitir a un africano extranjero que adquiera, arriende u ocupe tierras en la zona de libre adquisición por los indígenas.

78. En virtud de la ley, puede permitirse a un europeo que adquiera tierras en la zona de libre adquisición por los indígenas para fines docentes, religiosos o de otro tipo, que a su juicio redunden en beneficio de los africanos. Además, el Gobernador puede permitir a un europeo que ocupe o arriende tierras, por un máximo de 99 años, en la zona de libre adquisición por los indígenas, para esos mismos fines, para fines administrativos del Gobierno o para la construcción de hoteles y alojamientos de viajeros o para destinarlas al comercio u otros fines semejantes.

Zona europea

79. La *Land Apportionment Act* de 1941, en su forma enmendada, establece que las tierras de la zona europea pueden enajenarse a cualquiera que no sea africano. Con esta reserva, un propietario europeo es libre de enajenar su tierra en la forma que desee.

80. La ley permite arrendar, enajenar o ceder de otro modo las tierras de la Corona situadas en la zona europea a un europeo que responda a la definición que se hace en la ley ("persona que no es un africano"), aunque dicha tierra esté ocupada en aquel momento por africanos. A estos africanos, calificados de "ocupantes sin título", se les permitía seguir en la tierra hasta que fuesen expulsados por el Gobernador de conformidad con la ley que permite expulsar a los africanos de las tierras situadas en la zona europea. A los africanos se les había permitido también permanecer en las tierras de la Corona situadas en la zona europea, en las condiciones establecidas por el Gobernador, hasta una fecha fija, que después se prolongó y que finalmente expiró el 31 de agosto de 1962. Desde entonces, la ocupación por africanos de las tierras de la Corona situadas en la zona europea se ha considerado ilegal, con algunas pocas excepciones que se mencionan más adelante. Desde que entró en vigor la primera *Land Apportionment Act*, centenares de miles de "ocupantes sin título" africanos han sido expulsados de las tierras que ocupaban en la zona europea.

81. La ley de 1941 prohíbe en general a un africano adquirir, arrendar u ocupar tierras en la zona europea, y a cualquier propietario u ocupante de tierras en dicha zona o a sus agentes, ceder, tratar de ceder o arrendar estas tierras a un africano, o permitirle que las ocupe. Estas prohibiciones están sujetas a algunas excepciones, principalmente para permitir a los empleados africanos de un terrateniente europeo que ocupen legalmente la tierra, para que los africanos puedan obtener asistencia médica en la zona europea, y para fines docentes, religiosos u otros fines autorizados.

82. La *Rural Land Act* de 1963 (que sustituyó a la *Land Settlement Act* de 1944) regula la adquisición y cesión de tierras de la Corona tanto en la zona europea como en la zona de libre adquisición por los indígenas. Dicha ley autoriza al

Ministro a adquirir con fondos públicos las tierras de propiedad privada que considere adecuadas para su colonización o que necesiten ser roturadas como medida previa a su colonización. Las propuestas de adquisición de estas tierras para la Corona deben someterse a la Junta Rural, que tiene carácter consultivo. El Ministro está también autorizado a gastar hasta 5.000 libras esterlinas en la compra de determinadas tierras en nombre de un solicitante particular, siempre que este último esté dispuesto a aportar un quinto del precio de compra en efectivo.

83. Las solicitudes de arrendamientos de tierras de la Corona deben presentarse a la Junta Rural. Al examinar y recomendar las solicitudes, la Junta debe tener en cuenta la edad, carácter y capacidad jurídica del solicitante para poseer tierras, ver si éste está dispuesto a hacer una declaración manifestando su intención de ocupar, cultivar y explotar personalmente dicha tierra en beneficio exclusivo suyo y de su familia, y considerar si el solicitante posee los requisitos y capital necesarios. La Junta sólo podrá recomendar la solicitud de una sociedad si ésta se ha constituido de conformidad con la legislación pertinente de Rhodesia del Sur y si la mayoría de los miembros de su consejo de administración son nacionales de Rhodesia del Sur. No obstante, el Ministro puede hacer una concesión de la Corona a una sociedad aunque no se cumpla esa condición.

84. De conformidad con la *Rural Land Act*, las tierras de la Corona se arriendan por períodos de cinco años por una renta anual equivalente al 5% del precio de compra. Si se ejerce la opción de compra, los pagos en concepto de renta efectuados anteriormente se consideran plazos del precio de compra.

85. La ley exige que el arrendatario ocupe la propiedad y fije en ella su residencia, que observe las leyes sobre conservación de los recursos naturales, prácticas agrícolas y explotación de las tierras; que realice los trabajos necesarios de mantenimiento y mejora; y que observe las prácticas adecuadas para el mejoramiento de los cultivos. Los arrendatarios deben llevar a cabo las actividades de laboreo en la medida y de la naturaleza que disponga la Junta Rural, y observar todas las instrucciones que curse la Junta.

86. Un arrendatario no podrá ceder, asignar, hipotecar o enajenar de otro modo su derecho, ni asociarse con otras personas para la explotación de la tierra, a menos que el Ministro preste su consentimiento por escrito después de consultar a la Junta.

87. Un arrendatario que ejerza su opción de compra tendrá derecho a obtener una concesión de la Corona siempre que haya pagado el precio total de compra y demás sumas adeudadas al Gobierno, que haya cumplido las condiciones de su contrato y que reúna los requisitos de nacionalidad.

Vigencia de la *Land Apportionment Act*

88. La Constitución de 1961 autoriza a la Asamblea Legislativa a excluir de la aplicación de la *Land Apportionment Act* de 1941 toda tierra reservada en virtud de una disposición legal cualquiera para parques nacionales, repoblación forestal, zonas de caza prohibida, cotos de caza o fines similares; todas las tierras que no sean tierras de la Corona, a petición del propietario y con su consentimiento; y todas las tierras cuya propiedad u ocupación no estén limitadas de conformidad con la ley a una clase determinada de personas. La Asamblea puede determinar asimismo las condiciones en que la propiedad u ocupación de las tierras dejará de estar limitada a las personas que pertenezcan a una clase determinada y, finalmente, modificar o revocar la *Land Apportionment Act* de 1941. Sin embargo, una disposición especial de la Constitución prohibía concretamente a la Asamblea imponer a la propiedad u ocupación de las tierras de Rhodesia del Sur ninguna limitación racial que resultase más onerosa que las previstas en la *Land Apportionment Act* en vigor a la sazón.

89. Durante las elecciones generales de diciembre de 1962 el Rhodesian Front se comprometió a respetar los principios de la *Land Apportionment Act*, en tanto que el partido de la

oposición, el Rhodesia National Party, prometió revocar dicha ley, a la que se habían opuesto constantemente los partidos políticos africanos. El Consejo Constitucional de Rhodesia del Sur criticó acerbamente la *Land Apportionment Act* en un informe publicado en febrero de 1964, en el que se describía dicha ley como "la encarnación de la discriminación racial". En su informe, que fue unánime, el Consejo se ocupaba únicamente de la zona de libre adquisición por los indígenas y de la zona europea. En dicho informe, el Consejo preguntaba qué valor tenía la Declaración de Derechos para proteger los derechos en el futuro mientras la ley denegase específicamente uno de estos derechos (a saber, el derecho a no ser objeto de discriminaciones en relación con la propiedad u ocupación de tierras).

90. El 4 de marzo de 1964, Sir Edgar Whitehead presentó una moción en la Asamblea Legislativa, manifestando su acuerdo con el informe del Consejo Constitucional en el sentido de que la *Land Apportionment Act* constituía una medida sumamente discriminatoria y contraria al espíritu de la Constitución de Rhodesia del Sur, y expresando la opinión de que dicha ley debía revocarse. Dicha moción fue derrotada por 31 votos contra 27. El 30 de julio el Ministro de Minas y Tierras, encargado de la aplicación de la ley en las zonas rurales, manifestó en la Asamblea Legislativa que el Gobierno no tenía intención de revocar la Ley^a.

B. Distribución de las tierras

91. La comparación entre la distribución de tierras en 1930 y 1963 arroja el siguiente resultado:

	1930	1963
	(Acres)	
Tierras tribales en fideicomiso	20.820.450	40.170.456
Zonas de libre adquisición por indígenas	—	4.215.784
Zona europea	49.469.000 ^a	35.900.000 ^a
Tierras nacionales	590.500	10.540.722
Tierras no reservadas	17.881.840 ^b	5.781.601

^a Aproximadamente.

^b Suma total de las anteriores zona no asignada y zona no determinada.

92. En el cuadro siguiente^c, se indican las posibilidades agrícolas relativas de la tierra en la zona europea y en la indígena:

	Porcentaje de la zona Europea	Porcentaje de la zona Africana	Porcentaje de la zona Rhodesia del Sur
<i>Región de cultivos</i>			
Cultivos especializados y diversificados, cultivos intensivos y ganadería ...	27,59	10,58	20,24
Cultivos semiintensivos (cereales de secano y otros cultivos comerciales; cría semiintensiva de ganado)	19,56	14,63	17,43
Cría de ganado semiextensiva y extensiva	50,98	70,07	59,23
Tierras no cultivables.....	1,87	4,72	3,10
TOTAL	100,00	100,00	100,00

^c Rhodesia del Sur, *Debates of the Legislative Assembly* (sin revisar), segundo período de sesiones, Décimo Parlamento, No. 3, vol. 57, col. 172.

^d Basado en los cuadros 34 y 48 del *Report of the Advisory Committee, 1962, on the Development of the Economic Resources of Southern Rhodesia with particular Reference to the Role of African Agriculture* (C. S. R. 28-1962).

93. En 1960, había 7.064 explotaciones agrícolas propiedad de europeos, cuya superficie total de 34.484.176 acres se distribuía del modo siguiente:

Explotaciones agrícolas de europeos

Tamaño (acres)	Número de explotaciones	Superficie (acres)
Menos de 1.001	2.100	742.462
De 1.001 a 2.500	1.841	3.202.878
De 2.501 a 5.000	1.723	5.951.217
De 5.001 a 7.500	566	3.488.379
De 7.501 a 10.000	219	1.895.962
De 10.001 a 15.000	258	3.144.637
De 15.001 a 20.000	113	1.968.026
20.001 ó más	244	14.090.615
	7.064	34.484.176

En estas explotaciones, sólo se cultivaban 1.029.130 acres; en cambio, unos 360.000 campesinos africanos autorizados cultivaban 3 millones de acres en las zonas indígenas.

94. Algunas de las explotaciones agrícolas mayores son propiedad de sociedades. Lonrho Ltd., tiene propiedades con una extensión de 1.018.323 acres, de los cuales 932.754 son pastos; Hippo Valley Estates, Ltd. posee 150.000 acres; Sir J. L. Hulett and Sons, de Natal, adquirió, en 1956, la finca Triangle, de 91.520 acres situada entre los ríos Sabi, Lundi y Mtilikwe, y en asociación con otros, controla otros 116.510 acres; y la Rhodesian Corporation Ltd. posee 42.806 acres.

95. Las explotaciones agrícolas propiedad de europeos aumentaron en los dos años siguientes hasta alcanzar una superficie total de 36.909.000 acres, y en 1936 y 1964 se realizaron las siguientes ventas de fincas:

	Fincas	Acres	Precio por acre (promedio)
1963	398	960.000	2 libras 16 chelines
1964	391	1.078.000	2 libras 14 chelines

96. En 1965 hubo gran demanda de fincas, con la consiguiente subida de precios. Las tierras de pastos se vendían a 1 libra esterlina aproximadamente el acre, las de cultivo de maíz a unas 7 libras esterlinas el acre y las de regadío en explotación a unas 50 libras esterlinas el acre. Las mejores fincas de tabaco se valoraban en 8 y 12 libras esterlinas el acre.

97. En la zona de libre adquisición por los indígenas, el 31 de diciembre de 1950 se habían enajenado a los africanos 2.637 fincas y parcelas, con un total de 573.167 acres, y se habían recomendado 2.410 solicitudes más. Once años más tarde, el número de fincas y parcelas enajenadas a terratenientes africanos había aumentado hasta 6.432, y sólo quedaban por asignar 500.000 acres. Se calculaba que de esta superficie podrían salir 1.000 fincas más, y en aquel momento había 2.721 solicitantes aprobados en la lista de espera. En 1964, había 14.000 maestros agricultores africanos capacitados para cultivar fincas, 6.981 de los cuales ocupaban fincas en la zona de libre adquisición por los indígenas, en propiedad o en arrendamiento con opción de compra. Se calculó que cuando la zona de libre adquisición por los indígenas alcanzase una superficie de 8 millones de acres, podría contener de 17.000 a 18.000 fincas y parcelas. Los precios originales de compra de las fincas propiedad de africanos eran los siguientes:

Número de fincas	Precio original de compra
6.852	Menos de 250 libras
31	Entre 250 y 449 libras
14	Entre 350 y 449 libras
1	Entre 450 y 499 libras
3	Entre 500 y 999 libras

98. Los agricultores europeos y los maestros agricultores africanos que no pueden obtener tierras en la zona de libre adquisición por los indígenas pueden solicitarlas en las tierras no reservadas. Algunos terratenientes europeos de la zona europea han solicitado también permiso para vender tierras a los africanos, transfiriéndolas previamente a la categoría de tierras no reservadas; la superficie total de tierras ofrecidas en este concepto ascendía a 144.142 acres en 1° de enero de 1963. En cambio, ningún terrateniente africano había solicitado permiso para vender sus tierras a los europeos en virtud de una disposición semejante de la *Land Apportionment Act*.

III. AGRICULTURA

A. Características generales

99. Sólo una quinta parte del Territorio, aproximadamente, sobre todo en el Alto Veld y en las regiones montañosas orientales, es adecuada para el cultivo intensivo. Además, buena parte de esa región está formada por suelo arenoso, de fertilidad bastante baja. El 15% de las tierras sólo son adecuadas, a menos que sean regadas, para la ganadería extensiva, necesitándose 30 acres de pasto para sostener una res de ganado mayor. Las dos terceras partes restantes de las tierras están sujetas a condiciones atmosféricas inciertas que determinan sus posibilidades para producir cereales, piensos y cultivos resistentes a la sequía y para la cría de ganado. En gran parte de esta región se necesitan como mínimo de 10 a 20 acres de pasto para mantener una res de ganado mayor. Por lo tanto, en más del 75% del país reinan condiciones que hacen de la producción agrícola una empresa llena de riesgos.

100. Sin embargo, en las regiones adecuadas para el cultivo se puede mantener un alto índice de productividad utilizando apropiadamente el suelo y haciendo grandes inversiones en fertilizantes químicos. Ni qué decir tiene que sólo los agricultores europeos poseen los capitales y los conocimientos técnicos necesarios para mantener semejante productividad. Estos agricultores se dedican también a la cría de ganado según principios científicos y tomando en debida consideración el valor de las ventas de ganado. Como se ha indicado ya, la comunidad agrícola europea dispone de una parte excesivamente alta de los mejores tipos de tierras.

101. Los agricultores europeos se han beneficiado también de una excelente red de servicios agrícolas y de comercialización. Durante la Federación, la dirección de estos servicios incumbía a las autoridades federales, pero desde entonces el Gobierno de Rhodesia del Sur se ha encargado de ellos.

102. La agricultura europea se practica en una escala relativamente grande. En 1963 había 6.242 explotaciones agrícolas europeas. Algo más de la mitad de las explotaciones tenían de 1.000 a 5.000 acres de extensión, pero el tamaño de 242 explotaciones o haciendas excedía de 20.000 acres. Más de 600 haciendas rebasaban los 10.000 acres cada una. Un cierto número de grandes haciendas ganaderas, explotaciones forestales y plantaciones azucareras son propiedad de sociedades, incluidas las filiales de la British South Africa Company, la Anglo-American y la Lonrho Grant. Si se excluyen estas grandes explotaciones, el tamaño medio de las explotaciones en 1963 se aproximaba a 2.500 acres, de los cuales estaban

cultivados 140. En la región de mayores lluvias, el tamaño de las unidades de producción oscila de 2.000 a 3.000 acres. Por ejemplo, en el fértil valle de Mazoe, 248 explotaciones ocupan 787.000 acres, de los cuales están cultivados el 15%.

103. Los agricultores europeos producen principalmente para el mercado. Según los cálculos oficiales de la producción agrícola del sector europeo en 1964, el valor bruto de la producción fue de 66,1 millones de libras esterlinas. Estos agricultores vendieron toda su producción de tabaco y el 75% de la de maíz.

104. Aunque gran parte de las tierras de propiedad de europeos están cultivadas extensivamente, el producto medio por acre es muy elevado. Por ejemplo, en 1958, el valor bruto medio del producto por unidad de producción europea se aproximó a 6.000 libras esterlinas, estimándose que los ingresos netos de la empresa han tenido que ser de 1.000 libras esterlinas por lo menos. Entre 1937 y 1960, el valor total de la producción en las regiones europeas aumentó en más de 1.000% y el volumen total de la producción en 259%.

105. La agricultura africana sigue siendo principalmente de mera subsistencia, pero, de una parte, aumenta la producción de cultivos comerciales en las reservas, y, de otra, los propietarios africanos de las zonas de libre adquisición para indígenas producen primordialmente para la venta. La falta de capital y el hecho de no proporcionar suficientes servicios de desarrollo de la comunidad y de extensión agrícola han mantenido la productividad del agricultor africano a un nivel bajo y la de las reservas estancada.

106. La agricultura africana sigue basada en el principio de alternar los cultivos, y, pese a la limitada superficie de que se dispone, las tierras se utilizan de manera extensiva. Los rendimientos por acre son bajos, alcanzando un promedio que oscila entre la cuarta y la quinta parte de los rendimientos obtenidos con cosechas similares en la región europea. Poco más del 2% de los productores utilizan fertilizantes o semillas seleccionadas. En las regiones africanas, las cosechas principales se cultivan en todo el país, sin tener en cuenta las condiciones climáticas. En estas regiones, la producción de productos lácteos es muy pequeña y, según las estadísticas oficiales, los africanos no producen leche alguna para la venta. El contraste entre la agricultura europea y la africana se refleja además en el hecho de que mientras que las explotaciones de las regiones europeas han sido objeto de estudios, y comprenden tanto tierras de cultivo como pastos dentro de sus lindes, las explotaciones africanas no están claramente identificadas ni incluyen tierras para pastos; estos últimos son comunales, y, en el mejor de los casos, sólo puede estimarse el tamaño de las explotaciones "vinculadas" a una familia. Se carece de datos sobre la dimensión media de las explotaciones africanas. En 1950 en las regiones africanas vivían cerca de 350.000 familias africanas. En las zonas de libre adquisición para indígenas, el tamaño de las explotaciones variaba de 50 a 1.000 acres en las regiones más secas. El tamaño de las explotaciones africanas varía en amplia escala dentro de las diferentes regiones africanas; un muestreo de 473 explotaciones de todas las regiones de lluvias dio a conocer que el 5% tenía menos de 5 acres, el 53% entre 5 y 10 acres y el 25% más de 40 acres.

107. En el cuadro siguiente figura el valor de las ventas de los principales productos agrícolas procedentes de todas las fuentes:

Periodo	Tabaco	Cereales	Azúcar	Ganado vacuno Sacrificados	Ganado porcino Sacrificados	Productos lácteos	Total
(En miles de libras)							
1963	33.780	6.132	6.879	8.036	1.203	2.539	58.569
1964	35.003	6.255	6.003	7.928	1.273	2.435	58.897
1965 (primeros ocho meses)	32.755	5.335	6.523	6.148	856	1.668	53.213
1964 (primeros ocho meses)	(29.491)	(5.465)	(3.531)	(5.644)	(843)	(1.586)	(46.560)

La cifra correspondiente a la venta bruta de la agricultura africana en 1963 y 1964 fue, respectivamente, 4.100.000 dólares y 4.300.000 dólares.

108. El ingreso bruto derivado del producto de la agricultura europea y la africana es el siguiente:

	1954	1960	1961	1962	1963.	1964
(En millones de libras)						
Agricultura europea	23,7	36,0	43,8	42,7	44,2	46,3
Agricultura africana	14,6	15,7	18,0	19,3	19,6	21,4
TOTAL	38,3	51,7	61,8	62,0	63,8	67,7

Conforme a este cuadro, la agricultura es la principal partida de las cuentas del ingreso nacional. Sin embargo, la mayor parte del ingreso bruto derivado de la agricultura africana consiste en producción de subsistencia (17.800.000 libras en 1964). Dada la importancia del tabaco y el azúcar, se tratan en sendas secciones.

B. Tabaco

109. En el cuadro siguiente se indica la evolución de la industria del tabaco curado al humo desde 1938, con intervalos de cinco años hasta 1958, y anualmente a partir de entonces:

Año de ventas	No. de productores	Superficie sembrada (en miles de acres)	Ventas totales (en millones de libras)	Rendimiento medio por acre (en libras)	Beneficios netos por subasta (en millones de libras)	Precio medio por libra (en peniques)
1938	493	45,7	25,0	548	1,1	10,72
1943	741	62,2	30,3	479	2,3	18,05
1948	1.460	112,6	74,7	663	10,1	32,56
1953	2.460	177,1	105,2	594	17,4	42,83
1958	2.821	210,1	152,7	753	23,2	36,45
1959	2.821	203,2	191,3	891	27,5	34,44
1960	2.821	197,1	217,9	1.038	31,0	34,16
1961	2.821	206,3	233,3	1.054	32,9	33,82
1962	2.821	204,3	230,8	1.050	33,6	34,96
1963	2.821	218,2	194,8	820	33,8	41,62
1964	2.821	256,0	323,8	1.152	35,0	25,94
1965	3.000 (aproximadamente)	256,0	245,8	1.082	33,8	33,00

Estas estadísticas comprenden el tabaco vendido en el mercado de Salisbury por productores europeos de Zambia, cuya producción total es, sin embargo, inferior al 8% del total.

110. En Rhodesia del Sur se cultivan otras variedades de tabaco aunque en escala mucho menor. En el cuadro siguiente se indica la producción de tabaco por variedades, distinguiendo entre la producción europea y la africana para los tabacos burley y turco; además, a efectos de comparación se dan las cifras correspondientes al tipo de Virginia curado al humo.

Burley					Turco				Virginia	
Cosecha europea		Cosecha africana			Cosecha europea		Cosecha africana		Cosecha europea	
Cantidad en miles de libras	Valor en miles de libras	Cantidad en miles de libras	Valor en miles de libras		Cantidad en miles de libras	Valor en miles de libras	Cantidad en miles de libras	Valor en miles de libras	Cantidad en miles de libras	Valor en miles de libras
1959	22	2	—	—	588	90	226	35	180.350	25.881
1960	—	—	—	—	1.260	No hay datos	618	No hay datos	207.000	29.463
1961	22	2	—	—	578	87	231	35	219.621	30.948
1962	91	14	—	—	237	36	54	9	215.602	31.410
1963	949	103	11	1	638	107	149	No hay datos	180.346	31.276
1964	No hay datos	No hay datos	303	No hay datos	1.140	No hay datos	264	No hay datos	323.836	35.002

111. Aunque las unidades de producción son pequeñas, la comercialización y la exportación de tabaco cada vez mayores constituyen una industria bien organizada, reglamentada por organizaciones establecidas por el Gobierno. En primer lugar, todos los productores de tabaco deben inscribirse en el De-

partamento de Agricultura y obtener una autorización de cultivo. Hechos estos trámites, se afilian a la Rhodesia Tobacco Association, asociación de productores unida estrechamente a la Rhodesia National Farmers Union. La Rhodesia Tobacco Association está financiada con una pequeña tasa de 1/3 de

penique por libra sobre las ventas de tabaco. Esta asociación está representada ante la Junta de Rhodesia para la Comercialización del Tabaco, la Junta de Rhodesia para Estudios sobre el Tabaco y el Consejo de Rhodesia para el Fomento de las Exportaciones de Tabaco, y contribuye a financiar las actividades de estos tres organismos. La asociación financia también investigaciones para orientar a los productores en la utilización de mano de obra, y ha organizado un régimen de seguro contra los daños causados por el granizo.

112. La Junta de Rhodesia para la Comercialización del Tabaco fue creado en virtud de la *Tobacco Marketing Act* de 1936, con la misión principal de organizar y dirigir las subastas de tabaco en Salisbury. Desde entonces ha estado encargada de la inscripción de los productores y la concesión de autorizaciones de cultivo a los mismos. La Junta se compone de un funcionario público como presidente, dos representantes de la Rhodesia Tobacco Association y dos miembros de la Tobacco Trade Association of Rhodesia.

113. El Consejo para el Fomento de las Exportaciones de Tabaco es una filial de la Junta para la Comercialización del Tabaco y fue creada para promover la venta de tabaco de Rhodesia en todo el mundo. En consulta con el Gobierno, el Consejo envía misiones al extranjero y señala los países con los cuales podrían concluirse acuerdos comerciales.

114. La Junta de Rhodesia para Estudios sobre el Tabaco, financiada por el Gobierno y la Rhodesia Tobacco Association, comprende entre sus miembros representantes del Gobierno, de los productores y de los compradores, mantiene estaciones de experimentación y lleva a cabo un programa de investigaciones para el cual se gastaron 214.354 libras en 1963-1964. El notable aumento de los rendimientos de la producción obedece en gran medida a las mejoras introducidas, gracias al programa de investigaciones sobre semillas, uso de fertilizantes, métodos de curación y lucha contra las plagas.

115. Finalmente, debe mencionarse la organización de compradores, la Tobacco Trade Association, que fomenta los intereses de todas las sociedades, consorcios o personas que participan *bona fide* en la subasta, compra, manipulación, envase y exportación de tabaco. Como se ha indicado anteriormente, esta asociación está representada en la Junta para la Comercialización del Tabaco.

116. Las tres sociedades siguientes administran cada una de ellas, directamente o por medio de una filial, una de las tres lonjas de subasta de tabaco autorizadas por la Junta para la Comercialización del Tabaco: la Rhodesia Tobacco Warehouse and Export Company (1946) Ltd., con un activo de

325.656 libras y beneficios de 52.390 libras para el año que terminó el 30 de septiembre de 1964; la Tobacco Auctions Ltd., con un activo de 420.411 libras y beneficios de 152.547 libras para los nueve meses que terminaron el 31 de octubre de 1963; y la Tobacco Sales Ltd., con un capital más reservas de 320.890 libras y un beneficio neto de 71.551 libras en 1964. Los directores de estas tres sociedades son originarios de Rhodesia.

117. Como se ha indicado en el capítulo sobre el sector industrial, las sociedades tabacaleras extranjeras, en particular los fabricantes británicos de cigarrillos, han realizado cuantiosas inversiones en instalaciones de elaboración y exportación de tabaco en Rhodesia del Sur y, en algunos casos, en fábricas de cigarrillos.

C. Azúcar

Generalidades

118. El cultivo del azúcar, que apenas existía hasta la segunda guerra mundial, ha crecido de manera considerable gracias a los programas de riego en gran escala en la zona de Sabi-Limpopo, en la parte sudoriental del Territorio. El cuadro siguiente muestra el volumen de la producción de azúcar en Rhodesia del Sur, y las importaciones y el consumo de la zona de la Federación, con intervalos quinquenales hasta 1957 y anuales desde 1958 a 1962:

		Producción	Consumo (incluyendo Rhodesia del Norte y Nyasalandia)	Importaciones
1937	10	11.700	11.700
1942	400	29.000	28.600
1947	500	23.900	23.400
1952	2.000	48.200	46.200
1957	6.800	76.500	69.600
1958	6.300	74.500	68.200
1959	11.700	79.400	67.700
1960	31.000	87.800	56.800
1961	45.000	96.000	51.000
1962	90.900	90.900	—

Se observará que la producción y el consumo de la Federación en su conjunto estaban en equilibrio en 1962.

119. El cuadro siguiente muestra las cifras reales y proyectadas de la producción y el consumo en Rhodesia del Sur, y de las exportaciones, para los años 1963-1968:

		Producción	Consumo en Rhodesia del Sur	Exportaciones a países vecinos	Exportaciones a países de ultramar
1963	(real)	137.600	62.900	25.700	49.900
1964	(real)	165.600	65.000	30.800	69.900
1965	(estimación)	277.500	70.200	50.200	157.100
1966	(estimación)	390.000	72.500	45.000	272.500
1967	(estimación)	497.500	75.000	30.500	391.500
1968	(estimación)	507.000	81.500	8.000	409.500

120. La Rhodesian Sugar Refineries, compañía controlada por la Tate and Lyle Limited tiene dos refinерías en Rhodesia del Sur que absorben alrededor de 70.000 toneladas de azúcar sin refinar y otras 50.000 toneladas se exportan a los países vecinos, aunque esta cantidad disminuirá a medida que estos últimos desarrollen su producción de azúcar. Este año quedan unas 157.000 toneladas para ser exportadas a países de ultramar. Se ha establecido una conexión ferroviaria con Triangle y Chiredzi, donde están surgiendo nuevas poblacio-

nes, sacando un ramal de la línea principal a Lourenço Marques, y se están construyendo instalaciones para la carga de azúcar en grandes cantidades en esta última ciudad.

121. Rhodesia del Sur entró en el mercado de exportación de azúcar en 1963, en un momento en que había una escasez temporal del producto y los precios mundiales eran desusadamente altos (105 libras la tonelada en noviembre de 1963). Desde entonces el precio mundial ha sufrido un marcado descenso (llegando a 22 libras la tonelada en febrero de

1965). En 1963 y 1964, Rhodesia del Sur pudo exportar 10.000 toneladas a los Estados Unidos de América, pero en 1965 su cuota fue reducida a 9.200 toneladas. Por otra parte, después de prolongadas negociaciones, el Territorio fue admitido al Acuerdo del *Commonwealth* sobre el Azúcar (*Commonwealth Sugar Agreement*) el 1° de enero de 1965. Se obtuvo una cuota británica de 25.000 toneladas largas anuales a un precio que se negocia anualmente a un nivel muy superior al precio mundial; para 1965 el precio es de £46.11.6 por tonelada larga f.o.b. en Lourenço Marques. Además, se pueden vender 100.000 toneladas largas por año a Gran Bretaña y Canadá a un precio preferencial que es en Gran Bretaña £3.15.0 y en Canadá £4.10.0 superior al precio mundial. Dentro del marco del Acuerdo del *Commonwealth*, la Tate and Lyle Ltd. ha concluido un acuerdo para comprar por lo menos 50.000 toneladas largas por año durante los próximos cinco años, de las cuales por lo menos 20.000 toneladas largas son para Canadá. Un grupo de importadores japoneses ha firmado un contrato para comprar azúcar sin refinar de Rhodesia durante un período de tres años en términos similares a los aplicables a otros proveedores; en el año 1965/1966 se enviarán 50.000 toneladas largas. Rhodesia del Sur está tratando de obtener una cuota bajo cualquier nuevo Acuerdo Internacional del Azúcar que pueda negociarse.

122. La comercialización externa del azúcar de Rhodesia del Sur está en manos de la Sugar Sales (Pvt.) Ltd., que es propiedad de las tres compañías productoras. La comercialización interna la efectúa la Sugar Marketing (Private) Ltd., compañía controlada por la Rhodesia Sugar Refineries Ltd., si bien tienen también participación los principales productores. Los precios internos están sujetos a regulación del Gobierno, que, sin embargo, ha asegurado márgenes de ganancia adecuados a los productores y refinadores.

123. En consecuencia la producción de azúcar se ha convertido en una actividad económica principal en Rhodesia del Sur, en la que las unidades de producción son grandes compañías con importantes participaciones extranjeras. Hasta el 1° de enero de 1965 se habían invertido 18.500.000 libras en la industria, que ya empleaba 21.200 personas, de las cuales 20.700 eran africanas. Se prevé que en 1968 la inversión en la industria ascenderá a 34.500.000 libras y que habrá 30.000 personas empleadas. El Gobierno, por su parte, habrá contribuido con 7.560.000 libras para obras de capacitación de aguas, 1.360.000 libras para ferrocarriles, 1.100.000 libras para carreteras y 500.000 libras para otros trabajos de desarrollo.

124. Las secciones siguientes dan detalles acerca de los principales productores:

Triangle Limited

125. La Triangle Limited es una filial, de propiedad exclusiva, de la Sir H. J. Hulett and Sons (Rhodesia) Ltd., que a su vez es propiedad exclusiva de la Huletts' Sugar Corporation Ltd., la mayor empresa productora de azúcar de Sudáfrica. De los quince directores de ésta, tres son británicos, entre ellos Lord y Lyle of Westbourne, de la empresa azucarera británica Tate and Lyle Ltd. La Triangle Ltd. posee en forma exclusiva la hacienda Triangle propiamente dicha, que tiene una extensión de 91.520 acres. Dos filiales formadas en conjunción con la Imperial Cold Storage Limited controlan 116.510 acres del vecino Rancho Nuanetsi, pero el resto de las tierras no han sido mejoradas, salvo en ciertas zonas experimentales. La Triangle Limited produjo 115.000 toneladas de azúcar sin refinar durante la molienda de 1964, y se espera que produzca 170.000 toneladas en 1965 y 200.000 en 1966.

126. Los costos totales del desarrollo de la hacienda Triangle hasta fines de 1965 ascienden, según se informa, a 12 millones de libras, de los cuales 3 millones fueron obtenidos en 1960 emitiendo obligaciones al 6 1/2%.

127. No se dispone de cuentas financieras separadas para la Triangle Limited. En 1963, el grupo Hulett en su conjunto

tuvo un ingreso neto, deducidos los impuestos, de 5.540.000 rands* con una producción total de azúcar de 584.000 toneladas, y pagó dividendos de 0,30 rands por acción de 1,00 rand de valor nominal. En cuanto al ejercicio económico terminado el 30 de abril de 1965, no es probable que el dividendo exceda de 0,30 rands por acción.

Hippo Valley Estates Ltd.

128. La Hippo Valley Estates Ltd. fue establecida en 1956 por Sir Ray Stockil, ex miembro de la Asamblea Legislativa de Rhodesia, y por otros seis agricultores interesados en aprovechar las posibilidades agrícolas de las praderas de Rhodesia. La extensión inicial de 40.000 acres fue elevada a 150.000 acres en 1961. El plan original era cultivar frutas cítricas y en junio de 1965 se habían plantado 100.000 árboles en la hacienda. En 1964, la producción ascendió a 103.000 cajas, 55.000 de las cuales fueron exportadas con la marca "Outspan" de la industria cítrica sudafricana.

129. En 1958 se decidió que debía cultivarse azúcar en la propiedad en cuanto se pudiera disponer del agua del sistema de Kyle-Bangala. Un consorcio de cultivadores de Isla Mauricio suscribió acciones de la compañía y convino en proporcionar servicios técnicos y de dirección. Se empezó a plantar caña de azúcar en 1959, y para 1964 había 8.400 acres cultivados con caña de azúcar y se había instalado un ingenio de segunda mano.

130. Una reevaluación del agua de riego disponible determinó que la asignación de la compañía se elevara de 150 a 230 pies cúbicos por segundo en 1963. La compañía se embarcó entonces en un programa de ampliación de 5 millones de libras en diciembre de 1963, para aumentar la superficie total cultivada con azúcar a 23.000 acres, de los cuales 15.800 serían sembrados por la compañía y 7.200 por cultivadores privados.

131. Luego vinieron nueve meses de notable desarrollo. Las actividades de desmonte, preparación de la tierra y sembrado progresaron a razón de 60 acres por día y la construcción de un canal de 250 pies cúbicos por segundo para llevar agua al nuevo terreno se efectuó a razón de 600 pies por día; también se construyeron diques para represar el agua y cientos de millas de pequeños canales. Este programa quedó terminado por la compañía en la fecha prevista, septiembre de 1964.

132. Este aumento considerable de la superficie cultivada con caña de azúcar ha hecho necesaria la construcción de un nuevo ingenio, que debe estar disponible para la molienda de 1965/66. Se esperaba que este ingenio, con una capacidad de molienda de 250 toneladas de caña por hora, quedase listo para funcionar en septiembre de 1965. Costará 3.500.000 libras.

133. Al terminarse la ejecución de los actuales planes de ampliación, en 1965, los gastos de capital de la Hippo Valley ascenderán a 7.750.000 libras.

134. Para obtener fondos para este desarrollo, la Hippo Valley Estates ha admitido como principales accionistas a la Rhodesian Anglo-American (filial de la Anglo-American Corporation of South Africa), la Rhodesian Breweries (filial de la South African Breweries Ltd. que, junto con ésta, posee acciones con un valor nominal de 261.111 libras) y la Tate Lyle Ltd., que posee acciones de un valor nominal de 275.000 libras de las 2.279.247 libras de capital emitido. Al 31 de diciembre de 1964, las reservas ascendían a 1.442.498 libras. La compañía obtuvo 146.284 libras de utilidades en el ejercicio terminado el 31 de marzo de 1963, y de 393.605 libras en el ejercicio siguiente; distribuyó su primer dividendo de 170.208 libras a razón de 6 peniques por acción de 5 chelines de valor nominal. La producción de azúcar en la propiedad fue de 37.000 toneladas durante 1964 y se esperaba que aumentara a 100.000 en 1965 y a un máximo de 175.000 toneladas en 1967.

* Un rand = diez chelines (de libra esterlina).

IV. MINERÍA

A. Generalidades

135. La ocupación de Rhodesia del Sur fue motivada directamente por su evidente riqueza minera. En un principio, los que buscaban minerales penetraron en Matabeleland y Mashonaland procedentes del sur, desde el año 1865, en que los exploradores descubrieron oro y se difundieron sus relatos sobre la existencia de ricos yacimientos auríferos en esa región. Como queda dicho en el capítulo I, Cecil Rhodes obtuvo, en 1889, una cédula real, en la que se autorizaba a la British South Africa Company a explotar las riquezas minerales de los territorios situados al norte del río Limpopo. En virtud de dicha cédula, la compañía podía otorgar concesiones de tierras o derechos de extracción de minerales, bien en plena propiedad o bien en arrendamiento.

136. En la primera época de su mandato (1890-1903) la compañía concedió licencias a buscadores individuales de minerales, reservándose una participación. No obstante, las esperanzas de encontrar vastos campos auríferos similares a los de Sudáfrica no se realizaron, y la producción de oro se mantuvo dentro de proporciones modestas (750.000 libras esterlinas en 1901). Aunque se conocía la existencia de otros minerales, no se buscaron ni se explotaron plenamente hasta la Primera Guerra Mundial. Se siguió dando la máxima importancia al oro y se presentaron denuncias de minas en número cada vez mayor.

137. En comparación con la producción de oro, la extracción de minerales viles fue lenta en desarrollarse; aunque se habían hecho varios descubrimientos antes de principios de siglo, su explotación comercial se retrasó, principalmente debido a la falta de ferrocarriles y de mercados. Sin embargo, con la primera guerra mundial, la atención de los produc-

tores se concentró en esos minerales; se produjo un rápido desarrollo de la producción de amianto, cromo y carbón; hierro, cobre, piedra caliza, piritas férricas, magnesita, mica, tungsteno, estaño, vermiculita, baritina, antimonio, arsénico, plomo y tántalo se fueron produciendo, gradualmente, en cantidades diversas y por distintos períodos.

138. Se ha calculado que, desde la segunda guerra mundial, distintas sociedades han invertido más de 10 millones de libras esterlinas en la búsqueda de yacimientos minerales. El Ministerio de Minas y Tierras de Rhodesia del Sur ha suministrado, en cierta medida, instalaciones y equipo, ayudando en el estudio y obtención de muestras de los yacimientos. Sin embargo, según el Presidente de la Cámara Minera de Rhodesia, la minería sólo ha resultado provechosa en el sentido de producir una pequeña parte del capital necesario para nuevas empresas y, por lo menos, un 75% de la producción minera ha procedido de posesiones mineras propiedad de inversionistas no pertenecientes a Rhodesia del Sur.

139. La minería se encuentra, casi exclusivamente, en manos de grandes sociedades internacionalmente conocidas. Los gastos de prospección son relativamente elevados y el capital ha sido proporcionado, sobre todo, por bancos de financiación situados en el exterior del país. Antes de 1964, una gran parte del capital necesario para la exportación de la riqueza minera del territorio procedía de los beneficios obtenidos en el "cinturón de cobre" de Zambia. Esta fuente no resulta ya de tan fácil acceso como antes. En 1963, el número de sociedades dedicadas a la minería y la explotación de canteras ascendía a 37; sus capitales activos y pasivos combinados eran los siguientes (expresados en millones de libras esterlinas)^b:

^b Oficina Central de Estadística, Salisbury: *Quarterly Bulletin of Financial Statistics*, julio de 1965.

ACTIVO A LARGO PLAZO

Activo fijo	Depreciación	Ajustes	Valor contable neto	Activo intangible	Inversiones	
					En sociedades subsidiarias	En otra clase de comercio
37,3	13,6	1,5	22,1	1,2	4,2	1,7

ACTIVO CORRIENTE

Reservas y obras en curso	Dividendos, etc.	Deudores	Activo líquido				Activo corriente total	Activo total
			Sociedades	Valores seguros	Monetario	Total		
3,0	—	2,5	1,1	1,5	0,9	3,4	9,0	38,2

PASIVO A LARGO PLAZO

Acciones			Capital total	Acumulado		
Ordinarias	Preferentes	Capital a préstamo		Pérdidas	Reservas	Total a largo plazo
20,6	—	3,5	24,1	3,2	10,8	31,7

PASIVO CORRIENTE

Giros bancarios en descubierto y préstamos	Otros préstamos a corto plazo	Acreeedores	Contribuciones futuras	Dividendos, beneficios e intereses	Otras obligaciones	Pasivo corriente total	Pasivo total
0,7	2,3	1,2	1,3	1,9	0,1	6,6	38,2

Fuente: Central Statistical Office, Salisbury: *Quarterly Bulletin of Financial Statistics*, julio de 1965.

140. Las operaciones y las cuentas consolidadas de las sociedades mineras fueron las siguientes (expresadas en millones de libras esterlinas):

INGRESOS

<i>Beneficios deducidos las pérdidas</i>	<i>Depreciación</i>	<i>Intereses, dividendos y beneficios</i>	<i>Renta</i>	<i>Otros ingresos corrientes</i>	<i>Transferencias</i>	<i>Total</i>
2,5	1,0	0,5	—	0,1	0,2	4,4

GASTOS

<i>Depreciación</i>	<i>Intereses</i>	<i>Contribuciones abonadas</i>	<i>Dividendos</i>	<i>Beneficios pagados</i>	<i>Otras transferencias</i>	<i>Balance de beneficios</i>
1,0	0,3	0,8	1,8	—	—	0,6

141. La producción minera de Rhodesia del Sur en los primeros años después de 1920 se calculó en casi 4 millones de libras esterlinas anuales y, en 1968, en 7.700.000 libras esterlinas. Después de la segunda guerra mundial la producción de minerales aumentó constantemente a pesar de las fluctuaciones de los precios y de retrocesos temporales. En 10 años, el volumen de la producción aumentó un 60%, alcanzando en 1961 la cifra no superada de 27.200.000 libras esterlinas. No obstante, en 1962 y 1963, tanto el volumen como el valor total disminuyeron ligeramente. Hubo dificultades de comercialización para determinados minerales, especialmente el cromo, el amianto y el carbón.

142. En 1964, los mercados favorables y la creciente actividad de la industria minera se reflejaron en mayor producción de los principales metales y de minerales, salvo el cobre, cuya producción, sin embargo, aumentó hasta una cifra todavía no superada. La tasa del volumen general se elevó de 91,7 a 98,2 (1961 = 100). Los aumentos de valor oscilaron: 1,6% para el oro, 12% para el cromo, 14% para el amianto, 25% para el mineral de hierro, 28% para el cobre y 41% para los minerales de litio. El valor total de la producción minera aumentó en un 12,7%, pasando de 23.700.000 libras esterlinas a 26.700.000 libras esterlinas.

143. Durante el primer semestre de 1965 la producción mineral total ascendió a 15.400.000 libras esterlinas, lo que equivalía a un aumento de un 20,4% sobre las cifras correspondientes al mismo período de 1964.

144. Desde la ocupación de Rhodesia del Sur, el valor total de la producción minera ha sido de más de 530 millones de libras esterlinas, de los cuales el oro representa 273. La minería aurífera siguió siendo la industria principal en cuanto a producción hasta la segunda guerra mundial, cuando fue superada por la de minerales viles, siendo ahora la producción de éstos casi tres veces superior a la del oro. La mayor parte del capital invertido en minería lo ha sido con fines de exportación a ultramar, aunque la minería destinada a las fábricas locales se encuentra bien establecida, especialmente la de mineral de hierro de las fábricas de acero de Que Que, la de piedra caliza para las fábricas de acero y cemento, la de amianto para la producción de cementos refractarios, etc. En consecuencia, la producción general de minerales brutos ha reflejado mucho la influencia de los precios y la demanda mundiales.

145. El número total de minas en funcionamiento en 1964 era de 45, distribuidas de la manera siguiente:

Oro	11	Piritas férricas	1
Amianto	8	Níquel	1
Carbón	1	Fosfatos	2
Cobre	5	Estaño	2
Cromo	10	Litio	1
Hierro	2	Tungsteno	1

146. El cuadro siguiente refleja la cantidad y valor de los principales minerales:

	1954		1962		1963		1964	
	(En miles de onzas finas)	En millones de libras esterlinas	(En miles de onzas finas)	En millones de libras esterlinas	(En miles de onzas finas)	En millones de libras esterlinas	(En miles de onzas finas)	En millones de libras esterlinas
Oro	536 (En miles de toneladas)	6,7	555 (En miles de toneladas)	6,9	566 (En miles de toneladas)	7,1	574 (En miles de toneladas)	7,2
Amianto	80	5,9	142	7,3	142	6,0	153	6,8
Mineral de cromo	442	2,5	508	2,7	412	1,9	493	2,2
Carbón	3.029	2,7	3.115	3,0	3.021	3,1	3.351	3,4
Cobre	0	0	15	2,7	18	3,2	18	4,2
Mineral de hierro	0	0	682	0,2	722	0,5	908	0,6
Minerales de litio	54	0,3	45	0,3	50	0,3	67	0,5
Estaño	23	0,0	758	0,7	558	0,4	573	0,6
Piedra caliza y dolomita	602	0,1	678	0,3	379	0,3	594	0,3
Otros minerales..	—	0,6	—	1,0	—	0,9	—	0,7
TOTAL		18,8		25,1		23,7		26,5

B. Oro

(En miles de libras)

Información general

147. En 1964, Rhodesia del Sur produjo el 1,41% de la cantidad total de oro extraído en el mundo (con exclusión de la URSS). De un total de 40.600.000 onzas de oro fino, de las cuales 29.100.000 correspondieron a la República de Sudáfrica, la producción total de Rhodesia fue de 575.000 onzas (en el cuadro del párrafo 12 se proporcionan datos sobre la producción de oro).

148. Durante muchos años los explotadores en pequeña escala han extraído considerable cantidad de oro, aunque sus actividades disminuyeron y han cesado ahora casi por completo. De las 566.000 onzas de oro producidas en 1963, correspondieron a los explotadores en pequeña escala solamente 17.000 onzas. En 1964 había once minas que tenían una producción de 10.000 onzas o más. En algunos casos las empresas de mayor importancia adquirieron las minas pequeñas, pero la gran mayoría se vio obligada a cerrar. Las minas controladas por las grandes empresas representan ahora más del 80% de la producción total de oro. Los principales productores de oro son las mismas minas descubiertas a principios de siglo y que no han dejado de producir desde entonces. Algunas de las minas cerradas se han abierto nuevamente en los últimos años, después de nuevas exploraciones a mayor profundidad de los escasos centenares de pies a que se había llegado cuando fueron abandonadas.

149. A continuación se indican las ventas netas de oro desde 1954:

(En miles de libras)

1954	6.547
1955	6.486
1956	6.483
1957	6.854

1958	6.772
1959	6.931
1960	6.961
1961	7.091
1962	6.845
1963	6.980
1964	7.086

150. Se ha producido plata como subproducto del oro. La producción de ese metal fue en 1924 de 166.472 onzas de plata fina por un valor de 22.488 libras; en 1950, de 85.549 onzas por un valor de 22.601 libras; en 1963, de 83.742 onzas por un valor de 32.283 libras. Casi toda la producción se exporta en forma de lingotes.

151. Según algunos informes se ha descubierto recientemente oro en Rhodesia del Sur. Las vetas descubiertas corresponden a una formación geológica conocida como cinturón metamórfico de Limpopo, que se extiende en la zona meridional de Rhodesia del Sur, lo que constituyó un hecho geológicamente extraordinario e inesperado. Una de esas vetas, que se considera la de mayor importancia en muchos años, se descubrió en la mina Up to Date (de propiedad de la Inyati Mining Co.), cerca de Bulawayo; y otra se encontraba en la mina Ranco, a 50 millas al sur de Fort Victoria. En noviembre de 1964, se localizó una vena de oro de un valor calculado en 10.000 libras en la mina Sunrise en el cinturón aurífero de Felixburg (región suroriental de Unvuma), uno de los yacimientos más antiguos de Rhodesia del Sur. El descubrimiento fue hecho por la Anglo American Corp. que adquirió los derechos de denuncia a la Felixburg Mines Ltd. Esta última conserva una opción para participar en un 50% de la propiedad en 1969. A continuación figura la lista de minas de oro activas en los últimos años:

Nombre	Ubicación	Empresa explotadora
Arcturus Mine	Arcturus (cerca de Salisbury)	Arcturus Mines Ltd.
Bell-Riverlea Mine	Sebakwe	The Globe and Phoenix Gold Mining Co. Ltd.
Cam and Motor Mine } Pickstone Mine } Patchway Gold Mine }	Gatooma	Rio Tinto (Rhodesia) Ltd.
Connaught and Bucks Mines	Cerca de Salisbury	Mazoe Consolidated Mines Ltd.
Dalny Mine	Cerca de Gatooma	Falcon Mines Ltd.
Queens Mine	Cerca de Bulawayo	Dawn Gold Mining Co.
Empress Mine	Cerca de Fort Victoria	Mashaba Gold Mines (Pvt.) Ltd.
Falcon Mine		Falcon Mines Ltd.
Globe and Phoenix Mines } Golden Valley Mine }	Sebakwe	The Globe and Phoenix Gold Mining Co. Ltd.
Kanyemba Hollis Mines } Hepworth Mines }	Cerca de Gatooma	Kanyemba Gold Mines Ltd.
Muriel Mine (oro/cobre)	Distrito de Banket	Homestake Gold Mining Co. Ltd.
Sebakwe Group of Mines	Que Que	Consolidated Gold Fields Ltd.
Turk Mine	Cerca de Fort Victoria	Thomas Meikle Trust and Investment Co. (Pvt.) Ltd.
Welconac Mine	Felixburg	Felixburg Mines (Pvt.) Ltd.

* Mina más profunda (profundidad máxima de unos 5.500 pies).

152. En las secciones siguientes se hace un resumen de la información disponible acerca de las principales empresas dedicadas a la extracción de oro y actividades de las mismas.

Empresas del grupo Lonrho

153. Las empresas de extracción de oro vinculadas al grupo Lonrho (véase también el anexo) son la Mazoe Consolidated Mines Ltd., la Kenyemba Gold Mines Ltd., la Mashaba Gold Mines (Pvt.) Ltd. y la Coronation Syndicate Ltd.

154. La Coronation Syndicate se constituyó en la República de Sudáfrica en 1902, a fin de adquirir en una extensa zona del Transvaal opciones y derechos que fueron posteriormente abandonados. El capital de la empresa era de 150.000 libras esterlinas en acciones de 100 libras. En diciembre de 1945 adquirió de la Hugh Trevis y Partners Ltd. de Rhodesia del Sur, la totalidad del capital emitido de la Homestake Gold Mining Ltd. Adquirió asimismo 21 derechos de denuncias en el Eldorado and Banket Group en el distrito de Sinoia, así como los intereses siguientes: 1) la Murile Mine, en el distrito de Sinoia, con 253 denuncias de explotación de oro, y 20.568 acres de tierras agrícolas; 2) la M'karadzi Mine en el distrito de Darwin, con 40 denuncias de explotación de oro¹, y la totalidad del capital emitido por la Arcturus Mines Ltd., con 227 denuncias de vetas auríferas¹ y otros bienes de capital.

¹ La explotación de esta mina ha sido suspendida.

¹ En 1963 la Arcturus Mine Ltd. era propietaria de 377 denuncias de vetas auríferas y de una planta.

155. En 1963, el capital autorizado de la Coronation Syndicate era de 600.000 libras en 4.800.000 acciones de 2 chelines y 6 peniques cada una; se suscribieron y realizaron totalmente 3.220.000 acciones, pero de este capital, 1.045.280 acciones eran de propiedad del grupo Lonrho. La Junta Directiva estaba integrada por el Sr. S. F. Dench (Sudáfrica), como Presidente, y por el Sr. G. Abdinor (Sudáfrica), el Sr. A. H. Ball (Reino Unido), el Sr. C. C. Bentley (Sudáfrica), el Sr. C. F. Brown (Rhodesia del Sur), el Sr. H. W. Jones (Sudáfrica), el Sr. A. J. B. Ogilvy (Reino Unido), y el Sr. R. W. Rowland (Rhodesia del Sur). La oficina central de la empresa está en Johannesburg, Sudáfrica.

156. En julio de 1963, todos los intereses mineros del grupo Lonrho fueron transferidos y agrupados en la Syndicate. El pago recibido por Lonrho se hizo en forma de 45 acciones (de 25c cada una) de la Coronation Syndicate por cada dos acciones de las Mashaba Gold Mines; 55 acciones de la Coronation Syndicate por cada cuatro acciones de la Mazoe Consolidated Mines y dos acciones de la Coronation Syndicate por cada cinco acciones (de 50c cada una) de las Kenyemba Gold Mines. La empresa debía emitir 2.780.000 acciones de 25c cada una, y acreditadas como acciones realizadas totalmente, para satisfacer dichas compras. Después del aumento del capital autorizado a 7 millones de acciones, quedaría 1 millón de acciones en reserva. Como resultado de la nueva fusión, la Coronation Syndicate se convirtió en empresa subsidiaria de Lonrho, que controla ahora el 61% aproximadamente de su capital.

157. A continuación figura un resumen del estado de cuentas de la Coronation Syndicate al 30 de junio de 1963:

PASIVO (rands)*

Capital	Reservas	Capital en acciones			Acreedor	Impuestos	Pasivo corriente total
		Cuántía	Por acción	Dividendo			
850.000	892.950	1.697.950	530	131.458	142.462	91.530	365.450

Activo (rands)

Fijo	Inversiones	Equipos	Deudores	Efectivo, metálico, etc.	Activo corriente (excluido equipo)	
					Total	Neto
858.246	203.429	136.018	58.541	807.116	865.707	500.257

* Un rand = 10 chelines (de libra esterlina) = 1,40 dólares de los EE. UU.

Rhodesian Corporation Ltd.

158. Esta empresa se constituyó en Rhodesia del Sur en 1924 a fin de adquirir el activo, incluso las tierras, de otras varias empresas. El capital autorizado de la misma es de 1.511.110 libras, en 9.066.660 acciones de 3 chelines 4 peniques cada una. En 1964, el capital suscrito era de 1.080.869 libras. La Junta Directiva estaba integrada por el Sr. C. J. Burns (Reino Unido), como Presidente, y por los Sres. C. H. Higgins (Reino Unido), J. F. Ince (Reino Unido), P. A. Jousse (Rhodesia del Sur), V. W. Whitehead (Rhodesia del Sur), F. L. Wigley (Rhodesia del Sur), como suplente, y el Sr. J. A. Griffiths (Reino Unido). La oficina central de la empresa está en Londres.

159. Los intereses de la Rhodesian Corporation Ltd., están diversificados, pero corresponden a dos categorías principales: en Rhodesia del Sur abarcan la agricultura, terrenos para construcciones y minería, mientras que en el Reino Unido están representados por una importante cartera de inversiones².

* Al 31 de enero de 1965, el valor de mercado de la cartera de la Corporación era de 834.719 libras, mientras que el valor en los libros era de 543.839.

En Rhodesia del Sur, la empresa es propietaria de 42.806 acres de tierras, y sus operaciones varían de la agricultura y la ganadería hasta el cultivo de tabaco¹ y la minería. La empresa es propietaria de la Fred Mine y de la Redwing Mine adyacente^m. Además, la empresa tiene intereses por partes iguales con la Globe and Phoenix Gold Mining Co. Ltd., en el conjunto de derechos de denuncia de la John Bull and Phoenix West Parallel. Tiene asimismo importante participación en la Falcon Mines Ltd., la Rhodesian Brick and Potteries Co., Ltd., y varias otras empresas en Rhodesia del Sur y en otras partes. En la República de Sudáfrica la empresa dispone de 13.362 morgenⁿ de tierras, de las cuales 10.100 representan derechos de explotación mineral solamente.

160. El estado de cuentas de la Corporación, para el ejercicio económico de 1963 era el siguiente:

¹ En el capítulo III sobre agricultura, figura una descripción de dichas actividades.

^m Estas dos minas fueron cerradas en 1961.

ⁿ Una hectárea = 2,47 acres = 1,17 morgen.

	1963 (En miles de libras)
Activo:	
Corriente	127,3
Fijo	546,9
Denuncias y propiedades	115,2
Equipo, etc.	56,5
Inversiones	518,2
TOTAL	1.364,1

	1963 (En miles de libras)
Pasivo y capital:	
Pasivo corriente	110,5
Reservas	172,7
Capital	1.080,9
TOTAL	1.364,1

Beneficio neto (período finalizado el 30 de septiembre)	78,6
Dividendos e intereses recibidos	62,6
Dividendos abonados	66,2

161. Al final del ejercicio económico terminado el 30 de septiembre de 1964, el activo fijo era de 559.900 libras y los derechos de explotación mineral y propiedades de 113.300 libras. La empresa realizó un beneficio neto de 69.162 libras, de las cuales 50.054 libras se pagaron en concepto de impuestos. El beneficio neto fue inferior en 9.419 libras al del año an-

terior, debido a un aumento en los impuestos del Reino Unido después de haberse amortizado las pérdidas anteriores. Los beneficios antes de la deducción de impuestos ascendieron a 119.216 libras, en vez de 102.244 para el año anterior; se mantuvo el pago de un dividendo del 10% (4 peniques por acción).

Falcon Mines Ltd.

162. La Falcon Mines Ltd. se constituyó en Londres en 1910. La principal fuente de ingresos de la empresa es la Dalny Mine que abarca 1.538 denuncias (incluyendo las secciones de Pixy y Arlandzer)*; entre otras propiedades mineras de la empresa figuran la Falcon Mine (30 denuncias) y las M'tuga Copper Claims en Zambia. La empresa es propietaria asimismo de dos fincas de una superficie total de 4.978 acres.

163. El capital autorizado de la Falcon Mines es de 600.000 libras en 2.400.000 acciones de cinco chelines cada una. El capital suscrito es de 499.298 libras. La Junta Directiva está integrada por los Sres. Wigley (Presidente), Abdinor, Dench (también Director del Coronation Syndicate), Ince, Jones, Jousse y O'Brien.

164. El activo y el pasivo de la empresa al 30 de septiembre de 1963 eran los siguientes:

* Al 30 de septiembre de 1964, las reservas de mineral de la Dalny Mine se calculaban en 833.300 toneladas evaluadas en 7,27 escrúpulos en un ancho de 84 pulgadas. En comparación con el año anterior, las reservas aumentaron en 12.900 toneladas, el valor en 0,45 escrúpulos y el ancho en 2 pulgadas.

PASIVO (libras)

	Capital	Beneficios y reservas	Previsión para renovaciones	Acreedores	Dividendo previsto	Total del activo y el pasivo
1963	499.293	243.863	7.347	56.206	87.376	1.984.085

ACTIVO (libras)

	Bienes inmuebles	Capital en acciones			Equipo, etc.	Deudores	Efectivo
		Cotizado	Valor de mercado	Sin cotizar			
1963	1.558.282	1.325	103.163	19.431	211.884

165. Los resultados de las operaciones de 1963 y 1964 fueron los siguientes:

	(En miles de libras)	
	1963	1964
Ingresos totales	336,7	352,6
Beneficios netos	315,0	328,5
Dividendos	174,8	187,2

The Globe and Phoenix Gold Mining Co. Ltd.

166. Esta empresa se constituyó en 1895 para explotar las minas Globe y Phoenix en Que Que, en el distrito de Sebakwe, y es propietaria asimismo del Bell Group of Mines del distrito de Gwelo, que comprende las denuncias de Bell, Riverlea, Orchid y Lourho. En 1963 la cantidad total de denun-

cias era de 1.106. La empresa tiene una importante participación en las acciones de la Phoenix Prince Gold Mining Co. Ltd., empresa a la que pasó en 1935 el control de la propiedad del Príncipe de Gales en cuanto a los derechos de explotación aurífera de 256 denuncias en el distrito de Mazoe. Además, la empresa es propietaria de tres fincas de 6.000 acres cada una.

167. El capital autorizado de la empresa es de 200.000 libras, suscrito en 800.000 unidades de 5 chelines cada una. La Junta Directiva está integrada por el Sr. A. Macquisten (Reino Unido), como Presidente, y Sir George S. Harvis-Watt (Reino Unido), el Sr. J. H. Younger (Reino Unido), Sir R. Snedden (Reino Unido) y el Sr. P. Macquisten (Reino Unido).

168. El activo y el pasivo de la empresa en 1962 eran los siguientes:

PASIVO (libras)

Capital	Reservas	Pasivo corriente	Acreedores	Dividendos	Pasivo corriente (total)	Total del activo y el pasivo
200.000	485.827	72.950	26.167	50.724	149.841	835.668

Activo (libras)

<i>Activo antiguo (explotación minera)</i>	<i>Equipo, etcétera</i>	<i>Deudores</i>	<i>Inversiones</i>	<i>Efectivo, etcétera</i>
92.000	49.293	28.788	155.435	510.146

169. Las cuentas de ingresos de la empresa en 1962 y 1963 eran las siguientes:

	<i>(En miles de libras)</i>	
	1962	1963
Ingresos	499,8	488,8
Beneficios	299,1	296,8
Impuestos	109,1	110,8
Dividendos	171,5	171,5

170. En junio de 1964, la Globe and Phoenix Gold Mining Co. y la Rhodesian Corp. convinieron en iniciar operaciones mineras en ciertas denuncias en la John Bull East Reef. La Globe and Phoenix efectuaría los trabajos de explotación de la vena y el beneficio resultante después de deducir todos los gastos se dividiría por partes iguales entre las dos empresas. Las ganancias resultantes de esta operación ascendieron a 10.792 libras.

Grupo de Rio Tinto

171. La Rio Tinto (Rhodesia) Ltd. se constituyó en 1956 en Rhodesia del Sur y adquirió en 1957, por la suma de 250.000 libras, los derechos de explotación mineral de las denuncias de la Empress Nickel al oeste de Gatooma, donde realizó actividades de prospección de diamantes durante un breve período. En 1959, la empresa adquirió la Leslie Gold Mines Ltd., que es propietaria de la Patchway Gold Mine al norte de Gatooma; compró además la cercana Big Ben Gold Mine y en asociación con el Sr. R. W. Rowland, financiero de Rhodesia del Sur, adquirió en su totalidad la Sandawana Mines (Pvt.) Ltd., incluso los depósitos de esmeraldas y otras denuncias de reservas minerales en el distrito de Belingwe. Por último, en 1960, la empresa compró todas las acciones (4.500.000) de la Rio Tinto Rhodesian Mining Ltd. que se describe a continuación.

172. En 1963, el capital de la Rio Tinto (Rhodesia) Ltd. era de 4 millones de libras, en 16 millones de acciones de cinco chelines cada una, de las cuales estaban totalmente realizadas 3.613.519 libras. El 99% aproximadamente de las acciones era de propiedad de la Rio Tinto Rhodesian Holding Co., Ltd., la Rio Tinto Mining Co. of Canada y la Rio Tinto Mining Co. of Australia Ltd. La Junta Directiva estaba integrada por el Brigadier M. A. W. Rowlandson (Rhodesia del Sur), el Sr. J. N. V. Duncan (Rhodesia del Sur), el Sr. E. H. T. Thompson (Rhodesia del Sur), el Sr. J. W. N. Sharpe (Rhodesia del Sur), el Sr. R. W. Rowland (Rhodesia del Sur), el Sr. R. W. Wright (Reino Unido), el Sr. R. S. Walker (Rhodesia del Sur), el Sr. R. H. Winters (Canadá) y el Sr. G. L. Hatherley. No se dispone de información acerca de las cuentas de la empresa.

173. La Rio Tinto Rhodesian Mining Ltd. se denominaba anteriormente Cam and Motor Gold Mining Co. (constituida en 1919). La mina Cam and Motor es la mina de oro más importante de Rhodesia del Sur, y comprende 1.256 denuncias en el distrito de Hartley. La empresa es propietaria además de la Pickstone Mine, con 583 denuncias en el mismo distrito, la Bowcop Claims que comprende 90 denuncias de minerales básicos en las cercanías de Pickstone, y otras 140 denuncias de oro y 59 denuncias de minerales básicos al sur del río Umsweswe en Gatooma.

174. El capital autorizado de la empresa es de 750.000 libras, en 6 millones de acciones, de las cuales 4.500.000 están suscritas y totalmente realizadas.

Dawn Gold Mining Co. Ltd.

175. Esta empresa es de propiedad, en su totalidad, del importante grupo internacional de la Consolidated Gold Field

Ltd. El capital autorizado de la empresa es de 50.000 libras en 100.000 acciones de 10 chelines cada una. En 1963, la Junta Directiva estaba integrada por el Sr. H. D. Hubbard (Sudáfrica) como Presidente, el Sr. D. J. White (Sudáfrica) y el Sr. J. W. A. Wright (Sudáfrica). La empresa era propietaria de 79 manzanas de tierras que abarcaban 755 denuncias de explotación de oro en el distrito de Buli. La Consolidated Gold Fields Ltd. tiene grandes intereses en la explotación de oro en Sudáfrica y en Australia.

*C. Amianto**Generalidades*

176. Los recursos de amianto de Rhodesia del Sur son principalmente de la variedad de calidad superior, aunque se producen también algunas variedades inferiores. La fibra es de longitud excepcional y figura entre las mejores del mundo. El territorio ocupa el tercer lugar como productor mundial de amianto crisotilo y el primer puesto en la producción de fibra larga de calidad superior. Los yacimientos más importantes se encuentran en la zona de Shabani-Belingwe y en Mashaba en el distrito de Victoria. Su espesor varía desde algunos pies hasta más de 300 pies. Al principio casi todas las minas se explotaban como canteras a cielo descubierto, pero después de la segunda guerra mundial la explotación subterránea ha reemplazado en casi todas las minas a la explotación a cielo descubierto. Las minas más importantes se encuentran en los distritos de Bulawayo, Victoria, Salisbury, Gwelo y Gwanda.

177. En 1964 Rhodesia del Sur produjo 153.541 toneladas de fibra de amianto, lo que representa un aumento de 11.291 toneladas con respecto al año precedente (y un valor adicional de 851.000 libras esterlinas). Esa cifra representa el 4,15% del total de la producción mundial. Las cifras de los principales productores del mundo fueron las siguientes:

	1964
Cifra mundial	3.690
URSS	1.500*
Canadá	1.377
Rhodesia del Sur	153,4

* Cálculo.

178. El valor de las ventas de amianto de Rhodesia del Sur en 1964 se calcula en 6.800.000 libras esterlinas contra 6.000.000 de libras esterlinas en 1963. Casi toda la producción de amianto se exporta pues el país utiliza sólo unos pocos miles de toneladas anuales en la industria de amianto-cemento. En 1964 las exportaciones se elevaron a un nivel sin precedentes (10.100.000 libras esterlinas), debido principalmente a un marcado aumento de la demanda mundial, especialmente de la industria de tuberías y de planchas de amianto cemento de Europa Occidental. Más de cincuenta países compran amianto de Rhodesia, y el principal importador es el Reino Unido con más o menos el 30%. Una compañía de Rhodesia del Sur, la Asbestos Refining Co. (Rhod.) (Pvt.) Ltd. explota una fábrica que mezcla fibras compradas a diversas minas y elabora un producto que ha sido exportado a cuarenta y dos países distintos. Sin embargo, las dificultades de comercialización aumentaron en 1964, y varias minas pequeñas de amianto se vieron obligadas a cerrar.

179. La mina Pangani de Filabusi, situada a sesenta millas al sudeste de Bulawayo, comenzó a producir en 1963; contiene macizos de mineral que proporcionan amianto de alta calidad no explotados anteriormente. Se han realizado las dos primeras de las tres etapas del plan de extracción, con un costo de

2.700.000 libras esterlinas, y se espera que la producción asegure un beneficio de más de un millón de libras esterlinas al año.

180. El número de minas activas era de veintidós en 1961, diecisiete en 1962 y dieciséis en 1963. Los productores más importantes están bajo el control del grupo Turner and Newall que posee minas que representan el 63% de la producción total de Rhodesia del Sur.

Turner and Newall Ltd.

181. Esta sociedad de cartera se constituyó en el Reino Unido en 1920 como sociedad colectiva de responsabilidad limitada, pero se convirtió en sociedad por acciones en octubre de 1925. Mediante varias filiales fabrica y vende amianto, productos de amianto-cemento, productos de magnesio y otros similares. El amianto crudo se obtiene de las minas de la compañía en Sudáfrica, Rhodesia del Sur, Swazilandia y Canadá. Entre las filiales de la compañía en Rhodesia del Sur figuran: la African Asbestos Mining Co. (Pvt.) Ltd. que explota la mina Nil Desperandum en el distrito de Shabanie; la Rhodesian and General Asbestos Corp. (Pvt.) Ltd. que posee las minas de Shabanie, Nashaba y Filabusi; y la Turners Asbestos Products (Pvt.) Ltd., que elabora varios productos de amianto-cemento en las fábricas de Salisbury y Bulawayo. En 1958 la Rhodesian and General Asbestos Corp. (Pvt.) Ltd. adquirió por 1.640.000 libras esterlinas el capital de la Rhodesian Asbestos Ltd. que explota la mina Temeraire, contigua a las minas Mashaba.

182. En 1953 la compañía adquirió una participación mayoritaria en la Porter's Cement Industries (Rhodesia) Ltd.,

y una participación minoritaria en la Porter's Cement Industries (Bulawayo) Ltd., en virtud de lo cual los accionistas ordinarios de cada compañía reciben una acción ordinaria Turner and Newall de una libra esterlina por cada dos acciones ordinarias de las compañías de Rhodesia.

183. El capital social de la compañía era al principio de 3 millones de libras esterlinas; se hicieron varios aumentos importantes de capital hasta alcanzar, con la segunda guerra mundial, la cifra de 7.250.000 libras esterlinas. Actualmente el capital social se mantiene en 60 millones de libras esterlinas, del cual se ha suscrito la suma de 49.292.135 libras esterlinas (el 7% en acciones preferentes acumulativas y el resto en acciones ordinarias). En 1963 el Consejo de Administración estaba compuesto en la forma siguiente: Sr. R. G. Soothill, Presidente; Sr. R. M. Bateman, Presidente interino; Sr. G. S. Sutcliffe, Sr. N. A. Morling, Sr. Kenneth Neve, Sr. J. A. E. Clogg, Sr. R. H. Turner, Sr. A. Russell, Sr. W. Blakey, Sr. J. H. Thompson y Sr. J. Wadell. La oficina matriz de Turner and Newall Ltd. se encuentra en Manchester, en el Reino Unido.

184. No se dispone de informaciones acerca de las operaciones y cuentas de la compañía, salvo que obtuvo utilidades netas de 12.700.000 libras esterlinas (antes de deducir los impuestos) en el ejercicio económico terminado el 30 de diciembre de 1963; se pagaron dividendos por valor de 3.578.741 libras esterlinas.

Otras empresas

185. Producen también amianto las compañías siguientes:

<i>Nombre de la compañía</i>	<i>Oficina principal</i>	<i>Producción</i>
Bend Asbestos Ltd.	Bulawayo, Rhodesia del Sur	1.664 toneladas en 1960
Boss Asbestos Mines (Pvt.) Ltd.	Mashaba, Rhodesia del Sur	340 toneladas mensuales (promedio) en 1964
Dominion Base Metals (Pvt.) Ltd.	Filabusi, Rhodesia del Sur	350 toneladas mensuales (promedio) en 1964
Ethel Asbestos Mines Ltd.	Salisbury, Rhodesia del Sur	3.600 toneladas en 1962
Kilmarnock Asbestos Mines Ltd.	Mashaba, Rhodesia del Sur	65 toneladas mensuales (promedio) en 1964
Lanninhurst Asbestos (Pvt.) Ltd. (de propiedad sudafricana)	Johannesburgo, Sudáfrica	803 toneladas en 1960
Longwood Asbestos Mining Co. (Pvt.) Ltd.	Filabusi, Rhodesia del Sur	10 toneladas mensuales (promedio) en 1964
Masheba Rhodesian Asbestos Co. Ltd.	Mashaba, Rhodesia del Sur	3.457 toneladas en 1962
Rex Asbestos Mines Ltd.	Salisbury, Rhodesia del Sur	
Ross McIntyre and Partners (Rhod.) (Pvt.) Ltd.	Shabani, Rhodesia del Sur	500 toneladas (promedio) en 1964
Thornwood Asbestos Mines (Pvt.) Ltd.	Bulawayo, Rhodesia del Sur	1.392 toneladas en 1962

D. Cromo

Generalidades

186. El Territorio posee amplias reservas de cromo de alta calidad propio para usos en la metalurgia y reservas casi ilimitadas de cromita refractaria y química. Se ha calculado que solamente en los yacimientos principales quedan unos 544 millones de toneladas de mineral de cromo. Las reservas que se atribuyen a todos los yacimientos conocidos ascienden a un total de 608 millones de toneladas, de las cuales unos 300 millones de toneladas se calcula que son de tipo metalúr-

gico. La diversidad de calidades permite una producción en gran escala de ferrocromo de alto y bajo contenido de carbono para uso como material refractario así como para la industria química.

187. Si bien en los últimos cinco años se ha registrado una depresión en el mercado de cromo de Rhodesia, las ventas y precios aumentaron en 1964 y en los primeros seis meses de 1965. En 1964 el Territorio produjo 493.371 toneladas de cromita evaluadas en 2.218.789 libras esterlinas en comparación con 412.390 toneladas el año anterior. Esta cifra representa

casi el 10,16% del total de la producción mundial. Más de la mitad de la producción es de calidad para usos metalúrgicos, unas dos sextas partes para usos en la industria química y una sexta parte para aplicaciones como material refractario.

188. La cantidad y valor de las exportaciones de cromo figuran en el capítulo sobre comercio exterior. Se exporta casi el 95% del mineral producido. Después de 1960 disminuyó la demanda de exportaciones, lo cual afectó a los productores más pequeños. Las exportaciones se dirigen especialmente a los Estados Unidos de América, cuyo principal proveedor de mineral metalúrgico en bloques de alta calidad es Rhodesia del Sur.

Rhodesia Chrome Mines Ltd. y African Chrome Mines Ltd.

189. La Rhodesia Chrome Mines Ltd. es la primera empresa productora de cromita en Rhodesia del Sur y ocupa todavía el puesto de principal productora de este mineral. Las pertenencias mineras de la compañía están situadas en los distritos de Gwelo (Selukwe) y de Victoria. La compañía se constituyó en Londres en 1908. Su capital social inicial se fijó en 60.000 libras esterlinas, pero en 1954 había aumentado a 600.000 con la apertura de una planta de separación por medios densos, y en 1961 se elevaba a 1.200.000 libras esterlinas. Las acciones son de una libra esterlina cada una y han sido suscritas íntegramente.

190. La African Chrome Mines Ltd. se formó en 1928 para fusionar ciertos intereses de la Rhodesia Chrome Mines Ltd., y de la Rhodesian Chrome and Asbestos Ltd. Las pertenencias de la compañía se encuentran en los distritos de Salisbury. El capital social que era al principio de 300.000 libras esterlinas se aumentó a un millón en acciones de una libra esterlina, totalmente suscritas. El Consejo de Administración es el mismo que el de la Rhodesia Chrome Mines Ltd. Las cuentas de la compañía no se publican.

191. Tanto la Rhodesia Chrome Mines como la African Chrome Mines están asociadas con una sociedad de cartera londinense, la Chrome Company Ltd., que en 1961 tenía un capital social de 190.000 libras y cuyos directores eran los Sres. Coward, Bantick, Coulson, Shankin y White. Los intereses que representa esta compañía son británicos y estadounidenses.

192. La Rhodesia Chrome Mine Ltd. tuvo en 1962 una producción de 233.101 toneladas, y la African Chrome Mines produjo 42.544 toneladas.

Rhodesian Vanadium Corporation

193. La Rhodesian Vanadium Corp. es una filial que pertenece totalmente a la Vanadium Corp. of America; explota las minas Vanad y Sutton en Rhodesia del Sur, cuya producción alcanzó a unas 60.000 toneladas cortas de mineral de cromo en 1964, o sea más o menos el 30% de la producción total de cromo del Territorio. Posee también importantes yacimientos de magnesio en Zambia. Los miembros del Consejo de Administración de la Rhodesian Vanadium Corp. en 1964 eran los siguientes: Sr. G. L. Weissenburger (EE. UU.), Sr. S. A. Bott (Rhodesia del Sur), Sr. G. T. McGinnis (EE. UU.), Sr. D. A. Shriver (EE. UU.), y Sr. J. J. Epollen (EE. UU.).

194. La Vanadium Corp. of America se constituyó en el Estado de Delaware (EE. UU.) en 1919. Su capital es de 6.500.000 dólares distribuidos en 40.000 acciones privilegiadas convertibles de 100 dólares cada una y 2.500.000 acciones ordinarias (de valor nominal de un dólar).

195. Las cuentas de la sociedad correspondientes a 1959 señalan una utilidad neta de 2.494.445 dólares, después de desembolsados 2.380.000 dólares por concepto de impuestos a la renta; los dividendos absorbidos fueron de 1.626.741 dólares; los haberes realizables de 37.974.007 dólares y las obligaciones pendientes de 10.404.049.

Otras empresas

196. Producen también mineral de cromo las compañías siguientes:

<i>Nombre de la compañía</i>	<i>Oficina principal</i>	<i>Producción</i>
Aer Chrome Mines (Pvt.) Ltd. (filial de Cullinan Refractories, Ltd., compañía sudafricana)	Bulawayo, Rhodesia del Sur	Producción mensual media: 800 toneladas
Divide Chrome Mines Ltd. (participación sudafricana)	Salisbury, Rhodesia del Sur	Suspendidas las operaciones
Edinburg Development (Pty.) Ltd. (Bat Mine)	Salisbury, Rhodesia del Sur	7.500 toneladas en 1963
Frances Mines (Pvt.) Ltd.	Salisbury, Rhodesia del Sur	Producción media mensual: 250 toneladas
Mlota Mine (Pvt.) Ltd.	Salisbury, Rhodesia del Sur	
Pons Chrome Mines Ltd.	Gwelo, Rhodesia del Sur	En administración solamente
Rhodesian Cambrai Mines (Pvt.) Ltd. (con participación sueca y holandesa)	Gwelo, Rhodesia del Sur	20.160 toneladas en 1962
Rhodesian Metallurgical and Mining Co. (Pvt.) Ltd. (Mina Omsweswe)	Gatooma, Rhodesia del Sur	En administración solamente
Rhodesian Mining Enterprises (Pvt.) Ltd.	Salisbury, Rhodesia del Sur	Producción media mensual de concentrados semi-metalúrgicos: 1.600 toneladas
Windsor Chrome Mines (Pvt.) Ltd. Rose Chrome Mines (Pvt.) Ltd. (adquiridas por la Windsor Ferroalloys (Pvt.) Ltd.)	Que Que	2.000 toneladas mensuales de concentrados

E. Carbón

Generalidades

197. La primera región carbonífera descubierta en Rhodesia del Sur, y la única que se explota hasta ahora se encuentra en Wankie, a unas 65 millas al sudeste de las cataratas de Victoria. Ha sido por muchos años la principal fuente de combustible sólido para la zona de cobre de Zambia, ferrocarriles de Rhodesia e industrias manufactureras de los territorios vecinos^p. El aumento de la producción se vio obstaculizado, sin embargo, por la insuficiencia de los servicios de transporte. Después de 1951, el carbón para las minas de cobre se asignó mensualmente en conformidad con un acuerdo concertado entre los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos. Dicho acuerdo previó un préstamo de 5 millones de libras esterlinas de la Administración de Cooperación Económica para el desarrollo de los ferrocarriles de Rhodesia. La Administración de Cooperación Económica estaba interesada en la expansión de la producción de cobre y en el acuerdo Rhodesia del Sur se comprometió a asignar a las minas de cobre entre el 21% y el 29% del carbón producido en Wankie.

198. Los yacimientos de carbón del territorio son considerables. Las zonas carboníferas, catorce de ellas importantes, ocupan extensas regiones al sur del Zambeze y del Shangani, cerca de Beitbridge, en el noroeste, en Tuli en el sur y sobre el valle del Sabi en el sudeste. Cinco de las regiones carboníferas han sido exploradas en parte y sólo hay explotación minera en la zona carbonífera de Wankie. Las reservas de carbón de Wankie se calculan en 1.264.800.000 toneladas de carbón de coke, y 654.200.000 toneladas de carbón de otras clases; las otras cinco zonas carboníferas parcialmente exploradas tienen más o menos 45 millones de toneladas de carbón de buena calidad y 5.238.000 toneladas de carbón de más baja calidad.

199. El carbón se utiliza en el país para los ferrocarriles (casi el 25% de la producción total), para la metalurgia (ferroaleaciones de hierro y acero de la Rhodesian Iron and Steel Co.), para producción de energía (en zonas a donde no llega la producida por la presa de Kariba) y para uso industrial. El consumo total local es de más o menos 360.000 toneladas al año, de las cuales 80.000 son absorbidas por la industria tabacalera. Los hornos de coke producen más o menos 123.000 toneladas de coke al año. Una planta de subproductos fabrica alquitrán (800.000 galones en 1963), amoníaco, benzol (que se usa como aditivo del petróleo), tuluol y xylol (para las industrias de materias plásticas y químicas), naftalina y aceites de nafta y de antraceno.

200. En 1964 el total de la producción de carbón ascendió a 3.355.170 toneladas valoradas en 3.432.176 libras esterlinas, en comparación con 3.020.890 toneladas valoradas en 3.077.596 libras esterlinas en 1963. El total de ventas en el año que terminó el 31 de agosto de 1964 ascendió a 2.893.082 toneladas, lo que representa un aumento de 12.130 toneladas con respecto al año anterior: esto se debió al aumento de las ventas a los consumidores en general tanto en Rhodesia del Sur como en Zambia. La capacidad de la mina de carbón es de unos 5 millones de toneladas al año.

Wankie Colliery Co. Ltd.

201. La compañía se constituyó en el Reino Unido el 26 de octubre de 1923, como tercera reorganización de una compañía constituida en 1899 con el nombre de Wankie (Rhodesia) Coal, Railway and Exploration Co., Ltd. Fue reconstituida en Rhodesia del Sur en julio de 1954. El capital social fue inicialmente de 900.000 libras esterlinas y aumentó varias veces hasta alcanzar la cifra de 1.700.000 libras esterlinas después de la segunda guerra mundial. Ha emitido hasta ahora 10.555.620 acciones con valor total de 5.277.810 libras esterlinas. La compañía cuenta con derechos de extracción de car-

bón en una extensión de 42.000 acres en virtud de concesiones especiales otorgadas con fecha 10 de diciembre de 1901 y 29 de octubre de 1925, y derechos plenos sobre el suelo en el distrito de Wankie en una extensión de unos 29.000 acres. La Colliery Company posee también derechos sobre el suelo que comprenden unos 26.000 acres, en virtud de cesión en arrendamiento por el Gobierno de Rhodesia del Sur.

202. Los miembros del Consejo de Administración de la Wankie Colliery en 1964 eran el Sr. H. H. Taylor (Rhodesia del Sur) (Presidente), Sr. L. Wishart (Rhodesia del Sur), Sir Keith Acutt (Reino Unido), Sr. P. H. A. Brownrigg (Zambia)^q, Sir Frederick Grawford (Rhodesia del Sur), Sr. N. M. Kenny (Zambia), Sir Albert Robinson (Sudáfrica), Sr. J. W. Shilling (Sudáfrica) y Sr. M. van Weyenbergh (República del Congo)^r. La participación mayoritaria (más o menos el 23%) la tiene la Rhodesian Anglo-American Ltd., filial que pertenece en su totalidad a la Anglo-American Corporation of South Africa, Ltd. La compañía tiene una participación del 30% en la Clay Products Ltd., participaciones considerables en la Rhokana Corp. Ltd.^s, y en la Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd. así como la participación mayoritaria en la Sandringham Investments Ltd.

203. En el cuadro siguiente figura un resumen del activo y el pasivo, así como de los resultados financieros de la Colliery Company en 1964:

	(En miles de libras esterlinas)
Activo	
Planta y equipo	5.100
Inversiones	5.844
Existencias y almacenes	315
SalDOS con la Anglo-American Co.	594
Pasivo	
Capital	5.278
Reservas	4.354
Obligaciones	1.793
Impuestos	675
Acreedores	430
Dividendos devengados	396
Estado financiero	
Utilidades netas	1.364
Tributación	272
Ganancias netas	1.092

F. Cobre

Generalidades

204. Los minerales de cobre se encuentran en Mangula y la ley del mineral es de 1,07% de cobre y el rendimiento del 93,4%. Hay una zona del cobre de unas 35 millas de longitud y al este de ella se encuentran las minas Alaska y Silverside. Los minerales de cobre se encuentran a veces en filones de cuarzo aurífero tales como en la mina Muriel, pero la cantidad de concentrado de cobre aurífero que contiene no es muy grande. Las reservas totales de mineral de cobre se calculan en 31 millones de toneladas, con un contenido metálico de más o menos 424.000 toneladas; de ellas, 17.092.000 toneladas pertenecen a la M. T. D. (Mangula) Ltd.

205. Hasta hace muy poco la producción de cobre representaba un valor muy secundario. Actualmente depende en gran parte del mercado mundial y de los precios mundiales. En 1964 la producción fue de más o menos 18.000 toneladas cortas y se vendió en 4.156.000 libras esterlinas debido a los precios mundiales más favorables.

^q Miembro también del Consejo de Administración de la Anglo-American Corporation de Sudáfrica.

^r Miembro también del Consejo de Administración de la Union Minière du Haut Katanga.

^s Intereses en Zambia.

^p Las ventas a las minas de cobre de Zambia, a los ferrocarriles y a las minas de cobre de Katanga ascendieron a casi 900.000 toneladas en 1963.

206. En julio de 1965 se habría de terminar en Mangula una nueva instalación de lexivación de minerales con un costo total de 400.000 dólares y una capacidad aproximada de 1.000 toneladas de mineral diarias; cuando haya alcanzado la plena producción deberá agregar 250 toneladas de cobre mensuales. En 1964 se instaló una nueva fundición de cobre en la mina de oro de Muriel cerca de Mtoroshanga con un costo de 5.000 dólares. En otro tiempo el cobre extraído de la mina cubría los gastos de exportación del 15% al 17% de concentrados de cobre aurífero, con inclusión de fletes y fundición. Se espera que la nueva fundición empiece a funcionar a mediados de 1965 y que aumente los ingresos en 3.000 libras esterlinas mensuales.

M. T. D. (Mangula) Ltd.

207. Esta compañía se constituyó en 1947 con el nombre de Rhodesia Copper Ventures, Ltd. con el fin de adquirir ciertas concesiones de explotación minera en la zona que ahora posee en el distrito de Lomagundi. Las concesiones constan actualmente de 73 pertenencias en las cercanías de Molly Shaft, 51 pertenencias que comprenden las vetas cupríferas de N'Jiri, United Kingdom, Umboe, Muni, Chirom, Beduld, Greenfield y Dumbodzuko, y 23 pertenencias al este de Molly Shaft donde se encuentra la mina Silverside. La compañía posee también la explotación agrícola Whindale con una extensión de 2.964 acres, una parte de la explotación agrícola Plateau, con una extensión de 952 acres, una parte de la explotación agrícola Suiwerspruit, con una extensión de 750 acres y 1,43 acres en la finca Alfa. Otros 252 acres se encuentran en el poblado de Mangula. Las concesiones y explotaciones agrícolas están a unas 40 millas de Sinoia.

208. El capital social de la compañía es de 5 millones de libras esterlinas distribuidas en 20 millones de acciones de 5 chelines cada una. En 1964 el Consejo de Administración estaba compuesto por el Comandante H. F. P. Grenfell (Reino Unido) (Presidente), el Sr. D. E. Cox (Rhodesia del Sur), Sr. P. U. Rissik (Sudáfrica), Sr. W. I. Spence (Sudáfrica), Sir Charles W. Meredith (Rhodesia del Sur) y Sr. C. M. Stuart (Sudáfrica).

209. El activo y el pasivo de la compañía correspondientes a 1964 se resumieron en la forma siguiente:

	(En miles de libras esterlinas)
Activo	
Haberes realizables	365,1
Almacenes	214,1
Inmuebles	6.669,1
Inversiones	295,3
Pasivo	
Acreedores	205,1
Préstamos de la compañía matriz	62,7
Provisión para impuestos	23,9
Reservas	1.877,3
Dividendos	375,0

210. Las cuentas de la compañía señalaron una utilidad neta de 1.141.319 libras esterlinas o sea unas 430.000 libras esterlinas más que el año anterior; las razones de este aumento fueron el alza en el precio del cobre, una producción adicional de 550 toneladas de concentrados y un costo más bajo por tonelada del cobre recuperable producido.

211. La participación mayoritaria (más del 62%) en la M. T. D. (Mangula) Ltd., la tiene la Messina (Transvaal) Development Co. Ltd., compañía minera sudafricana registrada, mediante la filial que posee totalmente en Rhodesia del Sur, la Messina (Rhodesia) Development Co. Ltd. Entre otras filiales suyas figuran la M. T. D. Copper (Sales) Ltd., Arton Copper Co. Ltd., M. T. D. (Sanyati) Ltd. y la Messina Rhodesia

Smelting and Refining Co. Ltd. Esta última compañía se formó en 1959 con un capital de 750.000 libras esterlinas, el 80% de cuya suma fue suscrito por la Messina (Transvaal) y lo restante por M. T. D. (Mangula); en Alaska Siding (al oeste de Sinoia) se construyó una planta de fundición y refinado que comenzó a producir en diciembre de 1960. La empresa Messina (Transvaal) posee también la mina Umkondo, cuyas reservas de mineral de cobre se calculaban en 77.770 toneladas en 1964. La compañía posee además 850.000 acciones de la Rhodesian Iron and Steel Co. (Pvt.) Ltd., que representan el 23% del capital en acciones ordinarias de esta compañía.

212. El capital de la Messina (Transvaal) Development Co. Ltd., asciende a 2.500.000 libras esterlinas distribuidos en 10 millones de acciones. Esta compañía se constituyó en 1950, con el activo de una compañía del Reino Unido del mismo nombre que se había constituido en 1905 para la explotación de una mina de cobre en el Transvaal septentrional.

213. La producción de mineral de cobre de Rhodesia bajo el control de la compañía en 1964 se distribuyó en la forma siguiente:

	Toneladas	Contenido de cobre
Mina de Umkondo	74.210	2,68%
Mina de Alaska	224.120	2,04%
Mina de Mangula	1.085.120	1,17%
TOTAL	1.383.450	

La compañía produce más del 85% del total de concentrados de cobre de Rhodesia del Sur.

G. Hierro

Generalidades

214. Los yacimientos de mineral de hierro se encuentran distribuidos por todo el Territorio. En Que Que, las reservas ascienden a once millones de toneladas de mineral comprobado y a 25 millones de toneladas de mineral probable con un contenido de hierro del 55% como mínimo. La mina Beacon Tor (al sur de Que Que), posee reservas de más o menos cinco millones de toneladas de mineral con un contenido de hierro del 60%. Se calcula que los yacimientos de Buchwa en el distrito de Ingesi contienen 134 millones de mineral con un mínimo de 60% de contenido de hierro. Los yacimientos de Nyuni al este de Fort Victoria contienen un 60% de hierro, pero su magnitud todavía no se ha calculado. Hay también los yacimientos de Yank and Black Mamba, al oeste de Hartley. En varias otras zonas existen extensos yacimientos en forma de rocas ferruginosas listadas no tan ricas en contenido de hierro. Los yacimientos de Kwanesi al oeste de Featherstone contienen 33.000 millones de toneladas de mineral con un contenido de hierro calculado en un 40%, y 40 millones de toneladas de mineral con un mínimo de 55% de hierro (este último mineral pertenece a RISCO) (véase la sección V *infra*). Existe también un mineral de hierro cerca del río Mkumvrua y del Monte Darwin en el noroeste, en el valle de Sabi y en el valle de Zambeze. Las reservas totales se calculan en las cifras siguientes:

	En millones de toneladas
Alta calidad (más del 60% del contenido de hierro)	121
Calidad media (entre 50 y 60% de contenido de hierro)	73
Baja calidad (40% de contenido de hierro)	33.000

215. Hasta 1961, la producción de mineral de hierro se mantuvo baja, pues el mineral se necesitaba principalmente para los hornos de fundición de Recliff. A principios de 1961 la demanda de mineral de hierro aumentó rápidamente, debido en parte a las necesidades creadas por la expansión de la industria del hierro y el acero, y en parte a las exportaciones directas de mineral al Japón. En consecuencia, la producción aumentó de 427.600 toneladas valoradas en 466.000 libras esterlinas en 1961, a 908.200 toneladas valoradas en 582.000 li-

* Esta compañía posee una pequeña propiedad que contiene cobre, plomo y zinc; sus operaciones se interrumpieron en 1961.

bras esterlinas en 1964, y a 829.300 toneladas valoradas en 591.000 libras esterlinas en los primeros seis meses de 1965.

216. En 1964 las exportaciones de mineral de hierro ascendieron a 315.900 toneladas valoradas en 353.000 libras esterlinas. (Se exportaron además 240.700 toneladas de fundición bruta valoradas en 2.600.000 libras esterlinas, y se hicieron exportaciones considerables de productos de acero acabados). Cerca de 107.000 toneladas del mineral exportado procedía de la mina Beacon Tor, que pertenece a la Iron and Minerals Dev. Co. (Pvt.) Ltd. Según informes correspondientes a 1964, la compañía se propone realizar nuevas e intensivas investigaciones de reconocimiento de reservas adicionales de mineral. A petición del Gobierno de Rhodesia, una misión de una importante compañía de acero japonesa, la Kobe Steel Works, visitó Buchwa y Wankie para estudiar la viabilidad de la construcción de nuevas plantas siderúrgicas en Buchwa, en el distrito de Ingesi, donde los yacimientos tienen un contenido máximo de hierro del 64%. Se examinó también la posibilidad de construir instalaciones de nodulización en la mina Buchwa. La Buchwa Iron Mining Co. ha estado realizando un programa de expansión a un costo de 200.000 libras esterlinas encaminado a producir mineral de hierro a razón de 2 millones de toneladas anuales a fines de 1966. Los ferrocarriles de Rhodesia anunciaron en octubre de 1964 que habían recibido peticiones de transporte de grandes toneladas de mineral de hierro de la misma región.

H. Litio

Generalidades

217. En Bikita existen yacimientos de lepidolita petalita con un contenido de 3,6 a 10% de óxido de litio, contra el 1 a 2% en otras minas; estos yacimientos figuran entre los más extensos del mundo. Se pueden encontrar otros yacimientos en las zonas de Salisbury, Umtali y Wankie, aunque su exploración ha sido muy limitada. Las reservas se calculan en un total de 5.900.000 toneladas, con un promedio del 2,8% de óxido de litio.

218. El Territorio es el mayor productor de minerales de litio en el mundo. Una tendencia descendente en la producción observada desde 1957 se cambió en ascendente en 1963 y 1964. Debido a la creciente demanda y a un mercado cada vez más abundante para los compuestos de litio, se reanudaron las operaciones a plena capacidad en la mina de Bikita. La producción total en 1964 fue de 67.100 toneladas (valoradas en 463.000 libras esterlinas), contra 49.600 toneladas (valoradas en 328.000 libras esterlinas) en 1963, lo que constituye un aumento de casi un 50%. El total de la producción mundial es de más de 112.000 toneladas, y más de la mitad de este total está representada por el litio de Rhodesia del Sur.

219. Se exporta toda la producción de minerales de litio. En 1964 las exportaciones aumentaron en un 35% y su valor en un 41%. Estos aumentos se deben a un incremento constante de la demanda de compuestos de litio por parte de los Estados Unidos, Europa y Japón.

Bikita Minerals (Pvt.) Ltd.

220. La Bikita Minerals (Pvt.) Ltd. es virtualmente la única empresa productora de litio en el distrito minero de Fort Victoria. En 1963 el Consejo de Administración de la compañía estaba compuesto por el Sr. A. F. Holmes (Sudáfrica) (Presidente), Sr. A. C. Beatty (Reino Unido), Sr. T. H. Broadford (Reino Unido), Sr. J. Bryn (Sudáfrica) y Sr. D. Lawrie (Sudáfrica).

221. En 1954 la Bikita Mines Ltd. y la American Potash and Chemicals Corp. formaron juntas una compañía llamada American Lithium Chemicals Inc., para la manufactura de productos químicos a base de litio de los minerales de Bikita. La planta de esta compañía se encuentra cerca de San Antonio (Texas) en los Estados Unidos de América.

222. Entre los accionistas de la Bikita Minerals figuran Selection Trust Ltd. (40% de acciones poseídas directamente), Tresleca Ltd., American Metal Climax Inc. y American Potash and Chemical Corp.

I. Estaño

223. La mina más importante de estaño se encuentra en Kamativi. La producción de estaño ha aumentado en los últimos años debido principalmente a un aumento en la demanda mundial. Mientras que en 1963 se colocaron en el mercado 558 toneladas de metal de estaño por 436.000 libras esterlinas, en 1964 se vendió una producción total de 573 toneladas por 624.000 libras esterlinas. Más del 90% de la producción total se destina a la exportación. En noviembre de 1964 se informó que se habían descubierto más minerales de estaño en la zona de Kamativi y que habían ido allí varios cateadores con el fin de abrir nuevas minas.

Kamativi Tin Mines Ltd.

224. Esta compañía se constituyó en Bulawayo en 1951. Posee terrenos con yacimientos de mineral de estaño cerca de Dett, a unas cuarenta millas al este de Wankie. El capital social de la compañía se aumentó de 700.000 libras esterlinas a 3.000.000 en 1956. En 1964 el Consejo de Administración estaba compuesto por las siguientes personas: Sr. Ph. H. A. Zaalberg (Países Bajos), Presidente, Sr. H. Ebbinge (Países Bajos), Sr. H. P. Oakes, Sr. B. H. G. Sparrow y Sr. J. W. M. Bellasis.

225. La Kamativi Tin Mines Ltd. es la principal productora de estaño del Territorio. En 1963 la producción fue de 510.000 toneladas de mineral, el 72% de las cuales procedía de operaciones de superficie. Los concentrados se tratan en la fundición de la compañía, en la que se producen estaño refinado, aleaciones para soldaduras y metales blancos. Las cifras correspondientes al estaño producido por la compañía en 1962, con inclusión de los concentrados comprados a minas pequeñas, fueron las siguientes:

	En libras
Concentrados fundidos	2.148.003
Estaño refinado producido	1.520.989
Aleaciones de soldaduras	218.500
Metal blanco	20.000

226. La planta de Kamativi tiene capacidad para tratar 1.000 toneladas de mineral diarias, con posibilidades de expansión hasta 5.000 toneladas. La compañía se propone producir bastante estaño para atender las necesidades de toda el África meridional y comercializar el excedente en los mercados de ultramar. Con este propósito ha realizado activas exploraciones y ha completado hace poco la segunda etapa de un programa de expansión de tres años, cuyo costo es de 500.000 libras esterlinas.

V. LA INDUSTRIA SECUNDARIA

Introducción

227. El considerable aumento de la producción bruta^a de la industria secundaria de Rhodesia del Sur desde poco antes de la segunda guerra mundial, en que había unas pocas plantas de elaboración de alimentos y de otros tipos, hasta principios de la década de 1960, en que comenzó a nivelarse la curva de dicho aumento, se consiguió no obstante haberse tropezado con trabas, entre ellas una fuerza de trabajo no capacitada, la falta de puerto, el alto costo del transporte y la pequeñez del mercado.

228. Desde 1938, se ha venido levantando un censo manufacturero todos los años, salvo en 1954 y 1960. El cuadro siguiente indica el crecimiento del sector manufacturero de la economía en el período 1938-1962:

Año	Número de unidades	Producción bruta	Producción neta
		(miles de libras)	(en miles de libras)
1938	299	5.107	2.332
1948	473	25.858	10.906
1958	973	109.194	44.661
1962	1.043	148.704	59.630

^a Federation of Rhodesian Industries, *Survey of Rhodesian Industry, First Interim Report*, febrero 1954, cap. I.

229. El índice de precios de consumo aumentó casi dos veces y medio entre 1939 y 1962.

230. Desde la terminación de la segunda guerra mundial, las actividades manufactureras se han desarrollado a un ritmo notable^v y son actualmente un factor importante del ingreso monetario y del empleo. La expansión más sorprendente ha ocurrido en la producción de variedades baratas de bienes de con-

^v Advisory Committee on Industrial Development, *Report of the Advisory Committee*, 1962, pág. 26.

sumo, como ropa, textiles, calzado y en la elaboración de productos alimenticios, así como en las industrias más pesadas, como las siderometalúrgicas.

231. En el siguiente cuadro^w se clasifican detalladamente las cifras de producción del sector manufacturero en 1962:

^w Oficina Central de Estadística, *The Census of Production in 1962, Mining Manufacturing, Construction, Electricity and Water Supply*, Salisbury, octubre 1964, cuadro 1, págs. 10 a 18.

	Número de unidades	Producción bruta (miles de libras esterlinas)	Producción neta (miles de libras esterlinas)	Gastos netos de capital (en miles de libras esterlinas)
Matanza de ganado, preparación y conservación de carne	5	12.053	1.589	98
Productos de molino	20	7.646	1.448	722
Productos de panadería	65	5.108	1.656	146
Otros productos alimenticios	34	11.013	2.699	450
Alcohol, cerveza y bebidas espirituosas..	20	4.458	2.530	127
Bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas..	17	1.456	773	23
Productos de tabaco, inclusive la clasificación y empaque del tabaco comercial ..	13	7.406	4.216	715
Hilado, tejido y acabado de textiles, tejidos de punto, cordel, sogas y cordaje	26	8.680	3.196	249
Prendas de vestir, inclusive calzado	124	10.453	4.247	219
Manufacturas de madera y corcho, exceptuando los muebles	39	2.817	1.176	165
Muebles y accesorios	74	2.863	1.259	54
Pulpa de madera, papel y sus productos	14	3.726	1.500	212
Imprentas, editoriales e industrias conexas	62	5.097	3.262	394
Productos de caucho	15	3.176	1.625	83
Productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos	6	4.995	1.639	38
Pinturas, barnices y lacas	12	1.523	436	27
Jabones, velas y esmaltes	9	6.362	2.991	292
Productos de arcilla para construcción (ladrillos y baldosas)	22	784	582	14
Productos de vidrio, cemento y otros productos minerales no metálicos	39	4.525	2.466	137
Industrias básicas de hierro y acero	13	8.108	4.343	1.022
Industrias básicas de metales no ferrosos, inclusive fundición	6	1.694	342	40
Productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de transporte	150	10.307	4.757	386
Construcción de maquinaria, exceptuando la maquinaria eléctrica	16	652	326	28
Maquinaria y equipo eléctricos	52	3.522	1.616	110
Construcción de vehículos automóviles ..	16	6.128	1.282	217
Reparación de vehículos automóviles y de bicicletas	89	2.775	1.721	28
Construcción y reparación de otros tipos de material de transporte	10	5.777	3.330	48
Otras industrias manufactureras	42	1.924	1.022	62
TOTAL de las industrias manufactureras	1.043	148.704	59.630	6.466

A. Industrias principales y algunas de las empresas que las explotan

Manufacturas de tabaco

232. El hecho de que el mercado interno sólo consuma el 4% de la producción de tabaco del país destaca la necesidad vital de mercados de exportación para la industria. Apenas si hay capital británico en las plantaciones de tabaco, pero la Imperial Tobacco tiene intereses que se calculan en 4 millones de

libras en centrales de elaboración y otras actividades; se informa que la Gallaher Ltd. ha invertido 500.000 libras en nuevas instalaciones de picadura; la British-American Tobacco Ltd. tiene una fábrica de cigarrillos en Salisbury y la Rothman's Tobacco tiene también, según la lista publicada, intereses en el Territorio*. Hay asimismo algunas pequeñas empresas de industriales británicos de tabaco. Según informa la Gallaher Ltd.,

* *The Economist* (Londres), 9 de octubre de 1965, pág. 197.

sus utilidades netas en 1964 — después de pagar más de 9.900.000 libras (9.200.000 libras)* de impuestos — ascendieron a 8.742.000 libras (8.448.000 libras). Se pagó un dividendo final del 14% sobre el capital y se aumentó éste, distribuyéndose a los accionistas una acción más por cada diez, con lo que los dividendos fueron del 18,54% (16%) y absorbieron algo más de 4 millones de libras. Con todo ello quedó un remanente de cerca de 2.600.000 libras. La compañía anuncia también que las utilidades obtenidas durante el primer semestre de 1965 — antes de pagar los impuestos — ascienden a 9.700.000 libras*, contra 8.200.000 libras en el período correspondiente de 1964.

233. En junio, la Gallaher Ltd. abrió en Salisbury una nueva tabacalera^{aa}, la mayor del hemisferio meridional, por valor de 500.000 libras. La fábrica tiene por objeto separar mecánicamente la hoja del tallo del tabaco, labor que antes se realizaba a mano.

234. La B. A. T. Central Africa Ltd.^{bb}, antes denominada The Rhodesian and Nyasaland Tobacco Co. Ltd., tiene un capital social de 1.500.000 libras distribuido en 6 millones de acciones de 5 chelines cada una. La compañía se constituyó el 29 de marzo de 1920 con el nombre de Tobacco Development Co. (Rhodesia) Ltd., y ha cambiado de nombre varias veces. Originalmente sus actividades se centraban en la hoja de tabaco hasta que en 1944 compró una fábrica para la manufactura de cigarrillos y tabaco de pipa en Salisbury; en 1953 inició la producción en una nueva fábrica. La compañía, que está asociada con la British-American Tobacco Ltd., realiza actualmente sus operaciones comerciales en el África central por conducto de las filiales de propiedad exclusiva que ha establecido en Malawi, Zambia y Rhodesia. La Carlton Cigarette Company se afilió a ella en 1963. Al 30 de septiembre de 1964, su patrimonio social ascendía a 3.486.239 libras, y su activo fijo y reputación comercial se valoraban en 1.997.287 libras. El Presidente era el Sr. E. C. L. Cordy.

235. La Rothmans of Pall Mall (Rhodesia) Ltd. se constituyó el 20 de septiembre de 1960 y anunció la manufactura de cigarrillos en abril de 1961^{cc}; la compañía es titular de todas las acciones de la Rhodesia Cigarette Distributors (Pvt.) Ltd., que inició sus operaciones comerciales el 1° de noviembre de 1961. Tiene un capital social de 1 millón de libras distribuido en 3.600.000 acciones ordinarias y 400.000 acciones diferidas de 5 chelines cada una. Ha emitido 1.600.000 acciones ordinarias y 400.000 acciones diferidas, por valor de 500.000 libras. Al 30 de junio de 1964, el patrimonio social ascendía a 472.031 libras esterlinas, las obligaciones pendientes a 1.288.706 libras y los haberes realizables a 1.759.699 libras. Preside el consejo de administración el Sr. Geoffrey Ellman-Brown.

Tejidos e industria del vestido

236. Para asegurar la producción local de algodón, el Gobierno estableció alrededor de 1943 las primeras hilanderías en Gatooma. La industria manufacturera local consume dos terceras partes de la producción de bolas de algodón e importa además anualmente unos 4 millones de libras de fibra cortada de rayón. El hilado obtenido con estos materiales abastece a unas 25 fábricas que manufacturan gran variedad de tejidos blanqueados y teñidos de percal, dril, sarga y mezclilla, frazadas, tapices, toallas, bramanes, cordel y géneros de punto. Además de en Gatooma, hay fábricas en Bulawayo, Salisbury y Gwelo.

237. En 1955, la industria textil tenía 16 establecimientos, con una producción bruta valorada en 5.650.000 libras esterlinas y empleaba 5.739 trabajadores. En 1963 había 26 establecimientos con una producción bruta valorada en 9.570.000 libras y con 6.412 empleados. En 1964 el valor de las exportaciones ascendió a 7.400.000 libras, de cuya cifra, 5.500.000 libras correspondieron a Zambia y Malawi. La empresa británica de te-

jidos de algodón Whitehead and Sons (Holdings) ha anunciado que para noviembre de 1966 aumentará su producción en Rhodesia^{dd}. Se están construyendo ahora en Gatooma nuevas fábricas.

238. Rhodesia tiene unas 150 fábricas de ropa, con una producción bruta total valorada anualmente en 20 millones de libras esterlinas. Rhodesia ha concertado recientemente un acuerdo comercial con la República de Sudáfrica gracias al cual podrá posiblemente absorber las pérdidas que prevé en su comercio con Zambia^{ee}. Se habla de la posibilidad de que en un futuro inmediato un buen número de fabricantes sudfricanos de ropa abran establecimientos filiales en Rhodesia donde los gastos más bajos de fabricación representan ventajas y, sobre todo, donde hay condiciones favorables para la importación de tejidos. Los Estados vecinos de la República Democrática del Congo, Malawi y Zambia figuran entre los compradores más preciados. Las exportaciones de ropa en 1964 se valoraron en 7 millones de libras esterlinas.

239. La Gatooma Textiles Limited^{ff} se constituyó en Rhodesia en agosto de 1944. Tiene un capital social de 250.000 libras, distribuido en acciones de una libra esterlina cada una. Ha emitido 100.000 acciones de una libra esterlina. Además de los edificios de la fábrica, instalaciones y maquinaria, oficinas y almacenes, la compañía posee aproximadamente 400 hectáreas de tierras. En la central hay viviendas y campos de deportes, inclusive una piscina y pista de tenis, para el personal europeo, así como 250 casas de ladrillo en el sector africano, junto con una escuela, un salón de actos y un campo de deportes. Las ventas disminuyeron en 1962 y la compañía ha venido emprendiendo nuevas actividades comerciales. Al 31 de marzo de 1964, el patrimonio social ascendía a 264.894 libras, las obligaciones pendientes a 33.937 libras, y los haberes realizables a 298.831 libras. Preside el consejo de administración el Sr. John Francis Conway.

Fabricación de cemento

240. Las principales empresas productoras de piedra caliza y de cemento eran la Premier Portland Cement Company (Rhodesia) Ltd. (asociada a una compañía sudafricana, la Pretoria Portland Cement Co.) y la Rhodesia Cement Ltd. En 1963, ambas compañías fundieron sus negocios de cemento constituyendo, con participaciones iguales, una nueva compañía, la United Portland Cement Co. (Pvt.) Ltd. (UNICEM). Los yacimientos de piedra caliza controlados por la Premier Portland incluyen los siguientes: Gomla y Geoerge, en la reserva indígena Urungwe; Mbubu en la reserva indígena Maramba; Albany y Hashu, cerca de Gwelo; Belingwe y Shabani, Paignton y Cleveland, en Collenn Bawn (distrito de Gwanda). La Rhodesia Cement se constituyó en 1946 para explotar los yacimientos de piedra caliza existentes en la finca rústica "Cophall Block No. 2", distrito de Gwanda, y montó una fábrica de cemento.

241. La nueva compañía tiene un capital social de 2 millones de libras, repartido en 2 millones de acciones de un valor nominal de 1 libra cada una. Esas acciones se emitieron, enteramente liberadas, a la Premier y a la Rhodesia Cement, en proporciones iguales. A cambio de la emisión de 1 millón de acciones de 1 libra enteramente liberadas, la Premier transfirió a la UNICEM su activo fijo empleado en las operaciones de cemento y cal de la compañía, más equipo auxiliar, así como los yacimientos de piedra caliza de Rhodesia del Sur. Del mismo modo, a cambio de la emisión para la Rhodesia Cement de 1 millón de acciones de 1 libra de la UNICEM, enteramente liberadas, la Rhodesia Cement: a) cedió a la UNICEM el activo fijo de la compañía empleado en la producción de cemento y cal, más los yacimientos de piedra caliza y ciertos derechos que tenía en Rhodesia del Sur, y b) entregó 222.000 libras en efectivo a la UNICEM. La UNICEM es así propietaria de los yacimientos de piedra caliza

* *East Africa and Rhodesia*, 8 de abril de 1965, pág. 516.

^a *East Africa and Rhodesia*, 30 de septiembre de 1965, pág. 72.

^{aa} *The Cape Times* (Sudáfrica), 16 de junio de 1965.

^{bb} B. Beerman, *Financial Year Book of Southern Africa 1965*, vol. I, sección de Rhodesia, pág. 21.

^{cc} *Ibid.*, pág. 73.

^{dd} *The Star* (Johannesburgo), 17 de junio y 14 de agosto de 1965.

^{ee} *The Cape Times*, Suplemento de Rhodesia, *op. cit.*

^{ff} Beerman, *op. cit.*, pág. 27.

explotados por las dos compañías. Los yacimientos que explotaba la Rhodesia Cement eran propiedad de The Gwelo Land and Minerals Co. (Pvt.) Ltd., la que se los había cedido en arrendamiento. La UNICEM ha adquirido de la Gwelo Land, por el precio de 222.000 libras, las tierras que contienen esos yacimientos, utilizando para ese pago la suma en efectivo recibida de la Rhodesia Cement. En los últimos 10 años, los cánones pagados por la Rhodesia Cement a la Gwelo Land han pasado, por término medio, 11.000 libras anuales.

242. El consejo de administración consta de diez miembros, cinco de los cuales son nombrados por la Premier y los otros cinco por la Rhodesia Cement. Al constituirse la compañía en 1963, el primer presidente del consejo de administración fue el Sr. M. H. Barry (Rhodesia del Sur) (ex presidente de la Premier Cement) y el primer vicepresidente el Sr. L. A. Levy (Rhodesia del Sur) (ex presidente de la Rhodesia Cement).

243. El siguiente cuadro indica las cuentas consolidadas de la UNICEM después de la fusión de 1963:

OBLIGACIONES

(En libras)

	Capital	Reservas	Acciones liberadas		Sobregiro bancario	Acreedores	Total
			Total	Por acción			
1963	2.000.000	—	2.000.000	20/—	1.051.400	106.009	3.157.400

Activo

(En libras)

Activo fijo	Inversiones	Existencias y almacén	Deudores	Efectivo	Total de haberes realizables
2.484.826	36.907	635.667	—	—	635.667

244. Otros productores de piedra caliza y cemento eran en 1963 los siguientes:

a) The Salisbury Portland Cement Co. Ltd.: vinculada al grupo de la Associated Portland Cement Manufactures del Reino Unido. Su fábrica de cemento se halla en Manreso, cerca de Salisbury;

b) Early Worm Mining (Pvt.) Ltd.: produce piedra caliza metalúrgica y agrícola de alta calidad en la concesión Postal Bay 3;

c) Essexvale Lime Works (Pvt.) Ltd. en Essexvale. Su producción fue de 4.800 toneladas en 1960;

d) G. B. M. (Limestone) (Pvt.) Ltd. en Wankie. Su producción de piedra caliza metalúrgica fue de 1.900 toneladas en 1960;

e) Lomagundi Water Boring and Mining (Pvt.) Ltd. en Sinoia. La compañía produjo 12.000 toneladas de dolomita en 1961.

Hierro y acero

The Rhodesian Iron and Steel Co. Ltd. (RISCO)

245. Sólo se han efectuado prospecciones limitadas de las reservas de mineral de hierro de Rhodesia⁸⁸, pero se sabe que existen cinco yacimientos abundantes que se describen largamente en la sección V *supra*. En Rhodesia, la demanda de productos de acero ha excedido a la producción nacional y se han tenido que importar de Sudáfrica y del Reino Unido cantidades apreciables de este producto. En virtud de una ley de 1942 (Act of Parliament) se estableció una industria de acero, la Rhodesian Iron and Steel Commission (RISCOM), y se construyó una acería en Bulawayo. Al principio, se empleó chatarra de hierro para la producción. La RISCOM adquirió luego los yacimientos de hematites cercanos a Que Que, en el distrito de Gwelo, y, en 1947, hizo construir en Redcliff los primeros hornos para fundir el mineral de hierro de Rhodesia del Sur, que empezaron a funcionar en 1948.

246. Al principio, se extraía mineral principalmente para satisfacer la demanda de la función de Que Que, que producía lingotes de hierro y productos de acero, casi en su totalidad comercializado en Rhodesia del Sur y Rhodesia del

Norte. La producción de la fundición de Que Que y la de la vieja fundición de Bulawayo fue de 15.200 toneladas cortas de acero acabado y de 30.500 toneladas de hierro bruto en 1949; y aumentó a 22.300 y 39.500 toneladas respectivamente en 1953. Sin embargo, las operaciones de la RISCOM se hacían con pérdida. El Gobierno de Rhodesia del Sur intervino concediendo subsidios. Una comisión investigadora informó que las pérdidas acumuladas de 1 millón de libras se habían de cancelar. Se decidió subvencionar la industria a razón de 150.000 libras por año. El Gobierno negoció en 1956 con un consorcio de empresas de financiación del Reino Unido la suma de 6 millones con objeto de reorganizar la industria y, a principios de 1957, la Rhodesian Iron and Steel Co. Ltd. (RISCO) se hizo cargo de los haberes de la RISCOM que el Gobierno de Rhodesia del Sur le cedió. La compañía tiene muchos accionistas internacionales, entre los que figuran las compañías británicas Lancashire Steel y Stewarts and Lloyds, la Anglo-American Corporation, la Rhodesia Selection Trust, la British South Africa Co., la Messina (Transvaal) Development Co. y la Tanganyika Concessions⁸⁹.

247. Los haberes de la RISCOM se evaluaron en la suma de 4.300.000 libras (sin incluir la localidad europea de Redcliff), a cambio de la cual el Gobierno adquirió acciones y títulos de la compañía. El activo se calcula actualmente en 13 millones de libras.

248. La emisión inicial de acciones ordinarias fue de 3.100.000 libras. En 1963, el capital social era de 4.500.000 libras, en acciones de una libra. Se suscribieron y liberaron enteramente acciones por un total de 3.750.000 libras. La Messina (Transvaal) Development Co. Ltd. adquirió 850.000 acciones ordinarias de una libra cada una, 500.000 suscritas en efectivo y 350.000 totalmente liberadas, en parte para la compra de los yacimientos de mineral de hierro de Bukwe. Las reservas conocidas y probables de mineral de hierro de Bukwe que se han descubierto hasta la fecha ascienden a 134.500.000 toneladas, de un contenido medio de más del 60% de hierro. La Messina también recibió 250.000 libras en efectivo y el derecho a recibir un canon de seis peniques por tonelada respecto de todo el mineral de hierro que se extraiga de Bukwe durante un período de 99 años.

⁸⁸ W. L. Taylor, "Some Prerequisites for Southern Rhodesia's economic growth", en *Optima*, 1º de junio de 1962, págs. 87 y sigs.

⁸⁹ *Handbook to the Federation of Rhodesia and Nyasaland*, cap. 19, pág. 379.

249. El consejo de administración está integrado por el Sr. E. S. Newton (Rhodesia del Sur) (presidente), el Sr. D. R. Haysom (Sudáfrica), el Sr. P. H. A. Brownrigg (Zambia)¹¹, el Sr. T. P. M. Cochran (Rhodesia del Sur), el Commander H. F. P. Grenfell (Reino Unido), el Sr. P. E. Holloway (Rhodesia del Sur), el Sr. W. N. Menzies-Wilson (Sudáfrica) y el Sr. L. Tucker (Rhodesia del Sur).

250. En 1956, la RISCO acometió un programa de expansión para alcanzar una producción de 150.000 toneladas de acero en lingotes, a un costo de capital de 8 millones de libras, que se incrementó ulteriormente a 10 millones, al añadir una laminadora y otras instalaciones menores. Las instalaciones comprenden ahora tres altos hornos con una producción media de 900 toneladas de metal al día, dos hornos de solera abierta y un horno eléctrico que, en total, puedan producir casi 500 toneladas diarias de acero en lingotes, una laminadora desbastadora, una sección de laminación de 21 pulgadas y una laminadora de 12-10 pulgadas de acero comercial. También incluyen depósitos de gas, una instalación de purificación de gas, una batería de 50 hornos de coke y una instalación de derivados que produce alquitrán y benzol.

251. Hoy en día, la RISCO produce calidades básicas y de fundición de hierro bruto, lingotes para laminar y forjar; barras redondas, cuadradas y planas; secciones en ángulo, con canal y especiales, varillas de refuerzo redondas y cuadradas, piezas de fundición de todos los tipos y forjaduras conforme a las especificaciones de los ingenieros¹².

252. La producción de hierro en lingotes es actualmente de 1.000 toneladas diarias. La de productos de acero acabados es de alrededor de 120.000 toneladas por año. Los lingotes de acero producidos en 1962 pesaban 97.000 toneladas. Cada año se consumían unas 65.000 toneladas de productos de la RISCO en la "Federación de Rhodesia y Nyasalandia" antes de su disolución. Las exportaciones de lingotes de hierro se evaluaron en 2.756.000 libras esterlinas en 1963, y las de lingotes de hierro y acero en 6.000 libras esterlinas. La Rhodesian Steel Sales Company se encarga de la distribución de los productos de la RISCO.

253. Al parecer, el problema más grave es la localización de las instalaciones. Se hallan situadas en un paso estrecho, con colinas por tres lados y un río por el otro. La disposición de las instalaciones es tal que el límite máximo de su expansión es alrededor de las 150.000 toneladas, de manera que toda expansión ulterior requerirá probablemente el traslado de las instalaciones a otro lugar.

254. Otro problema básico es el costo relativamente alto de la producción, sobre todo si se tiene en cuenta que los precios de las materias primas y de la mano de obra son bajos. Aunque el costo de los productos manufacturados en Rhodesia es menor que el de los importados, resulta mucho más elevado que el costo potencial de una producción en gran escala. El costo seguirá probablemente elevado mientras la producción continúa siendo relativamente baja. Evidentemente, eso es verdad, por lo general, en la mayoría de los ramos de las industrias manufactureras de Rhodesia. Hay que señalar que millares de toneladas de acero que se emplean en Kariba proceden de Redcliff.

255. Se informó en julio de 1964 que la Rhodesia Iron and Steel Company estaba considerando la posibilidad de aumentar las ventas de hierro en lingotes, que eran entonces de 225.000 toneladas por año, a 665.000 y, ulteriormente, a 1 millón de toneladas por año. En la reunión anual de la RISCO, que se celebró en Redcliff el 22 de junio de 1965, se expuso que la decisión de realizar el programa de expansión se había tomado "después de haber obtenido las seguridades necesarias de mercados de ultramar adecuados a largo plazo". El programa costaría aproximadamente 7 millones de libras y se ex-

tendería por un período de 2 años y medio¹³. Se estimó que, aunque 1966 podía ser un año de contracción en los negocios, ya se habría vencido la crisis para cuando la ampliación estuviera terminada.

256. Se informó que el Ministro de Comercio e Industria de Rhodesia del Sur había declarado, en junio de 1965, que tal expansión era solamente el primer paso de una gran industria del hierro y el acero que tendría posibilidades de suministrar a los mercados mundiales cantidades sustanciales de acero debido a que se hallaba en buenas condiciones para competir. La producción de mineral de hierro incluiría 800.000 toneladas adicionales. La segunda etapa del programa de desarrollo se terminaría en 1972, y el gasto total sería de 13 a 14 millones de libras.

257. En la misma reunión, el presidente de la compañía informó que ésta había realizado unas utilidades netas de 496.566 libras esterlinas en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1964, mientras en los 12 meses anteriores había perdido 424.125 libras¹⁴. Las operaciones de la compañía en 1964 reflejaban unas utilidades en sus actividades comerciales y manufactureras de 1.727.296 libras, lo cual representaba un aumento de 829.618 libras con respecto al año anterior. Las utilidades netas, que se podían distribuir, se habían calculado deduciendo la desvalorización, los intereses y otros gastos y ajustes con respecto a partidas extraordinarias. El mejoramiento material, decía el informe, se podía atribuir a la explotación de las instalaciones durante todo el año virtualmente al 100% de su capacidad al cierre de las instalaciones, laminación de chapa y placa y al mejoramiento de las técnicas y procedimientos de explotación.

258. La RISCO comunicó que había tenido unas utilidades netas de 450.000 libras durante el primer semestre de 1965, o sea casi tanto como en la totalidad del año 1964¹⁵.

259. A solicitud del Gobierno de Rhodesia, ha estado recientemente en Buchwa y Wankie una misión de una compañía de acero japonesa, la Kobe Steel Works, para estudiar la posibilidad de construir nuevas acerías en Buchwa, distrito de Ingesi, cuyos yacimientos llegan a tener un contenido de hierro del 64%. También ha estudiado la posibilidad de construir instalaciones de nodulización en la mina de Buchwa.

Ferrocromo

Rhodesian Alloys (Private) Ltd.

260. La Rhodesian Alloys se fundó con objeto de producir ferrocromo de bajo contenido de carbón, materia prima indispensable para las aleaciones especiales del acero¹⁶. La decisión de montar una refinería en Gwelo, virtualmente en el centro de Rhodesia del Sur, se tomó a fines de 1949. Iba a localizarse en el empalme ferroviario principal de la Wankie Collieries, cerca de los yacimientos de cromo y en las principales líneas de comunicación con los puertos, primero con Beira y, más adelante, con Lourenço Marques. El conjunto del plan fue patrocinado por la John Brown and Co. Ltd., la British South Africa Company y la Rhodesian Anglo American Corporation. Las obras comenzaron en 1951 y estaban muy adelantadas en 1953.

261. El Ministro de Comercio e Industria de Rhodesia, Sr. G. W. Rudland, declaró¹⁷ que la conversión del mineral de cromo en aleaciones tenía probablemente un porvenir mejor que cualquier otra industria de Rhodesia. Creía que, en diez o quince años, la expansión de la industria la haría comparable con lo que la Zona del Cobre era para Zambia, todo ello gracias a que la energía de Kariba resultaba bastante barata.

¹¹ *The Cape Times*, 25 y 29 de junio de 1965; *The Star* (Johannesburgo), 27 de junio y 1° de julio de 1965.

¹² En *The Cape Times*, Suplemento de Rhodesia, 7 de agosto de 1965, pág. 5.

¹³ *East Africa and Rhodesia*, 9 de septiembre de 1965, pág. 36.

¹⁴ *Handbook to the Federation of Rhodesia and Nyasaland*, 1960, capítulo 19, págs. 380 a 382.

¹⁵ *East Africa and Rhodesia*, 14 de octubre de 1965, pág. 86.

¹⁶ También es miembro del consejo de administración de la Anglo-American Corporation de Sudáfrica.

¹⁷ Ministerio de Comercio, Industria y Desarrollo, *Development Opportunities in Rhodesia 1964, A Business and Investment Guide*, Salisbury, pág. 30.

262. El ferrocromo de bajo contenido de carbón se produce por fundición eléctrica en grandes hornos de arco voltaico donde los electrodos son del tipo de Soderberg. La Rhodesian Alloys emplea el procedimiento Perrin de la Société d'électrochimie, d'électro-metallurgie des Acieries électriques d'Ugine.

263. Las operaciones de fundición de ferrocromo de bajo contenido de carbón consumen grandes cantidades de energía y, aunque la Rhodesian Alloys operaba originalmente con electricidad de generadores térmicos que funcionaban con carbón de Wankie, confía ahora en la central hidroeléctrica de Kariba para abastecerse de energía.

264. Las cifras recientes indican que el aumento del valor de la producción ha sido para el país de unos 2.200.000 libras esterlinas por año^{pp}. La Rhodesian Alloys produce 17.000 toneladas de aleaciones del hierro todos los años y exporta ferrocromo de bajo contenido de carbón al Reino Unido, la República de Sudáfrica, el Canadá, los Estados Unidos y Australia.

265. La Rhodesian Alloys ha anunciado recientemente un plan de expansión de 2 millones de libras, que va a triplicar la producción^{qq} de aleaciones del hierro y a hacer de la compañía uno de los productores a más bajo costo del mundo entero. A las instalaciones que la compañía tiene en Gwelo se añadirían tres altos hornos más. La ejecución de la totalidad del plan va a requerir de veinte meses a dos años.

266. La John Brown and Co. Ltd., que es propietaria del 48% del capital de la Rhodesian Alloys Ltd. y del 50% de las acciones ordinarias y el 72% de las acciones preferentes de la F. Issels and Son Ltd., de Bulawayo, informó^{rr} que las utilidades totales, después de pagados los impuestos del ejercicio terminado el 31 de marzo de 1965, fueron de 1.947.035 libras (1.278.217 libras). Los dividendos ordinarios del 11%, menos los impuestos, representaron 860.776 libras. Se hicieron pasar al ejercicio siguiente casi 1.500.000 libras en la compañía central y 4.900.000 libras en las distintas sucursales. El capital en acciones es de 15.500.000 libras. El activo fijo del grupo excede de 18.400.000 libras, las inversiones ascienden a 2.800.000 libras y los haberes realizables menos las obligaciones pendientes a 16.500.000 libras. Los títulos de obligaciones suman 4 millones de libras. Lord Aberconway preside el consejo de administración.

La industria del automóvil

267. La proporción más grande del mercado^{ss} corresponde a la Ford Motor Company of Rhodesia, que tiene en Salisbury una fábrica de montaje valorada en 1.500.000 libras. Estas instalaciones^{tt} son una sucursal de la Ford of Canada. La compañía trata de producir 27 unidades diarias, cosa que todavía no ha logrado, aunque ya han salido de su cadena de montaje más de 10.000 automóviles. Se han satisfecho las necesidades del mercado local y no se han acumulado existencias. El aporte de la industria local a los automóviles que se montan en Rhodesia es apreciable y comprende neumáticos (entre otras, la Dunlop Rubber Co.), vidrio, que se produce en Umtali, pintura y baterías.

268. Las otras dos empresas fabricantes de automóviles son la Rootes (Central Africa) Ltd., y la Rover Company. Esta última es la que produce más vehículos con tracción en las cuatro ruedas, utilizados en el interior del país.

269. Se ha informado que la Rootes se está preparando para montar en sus talleres de Salisbury vehículos comerciales del grupo Chrysler de los Estados Unidos^{uu}. Espera montar el primer año unos 90 vehículos, lo que va a representar una cifra de negocios de 100.000 libras.

270. La Dunlop Rubber Co. Ltd., que tiene una fábrica en Rhodesia, informa que, en 1964, realizó unas utilidades, después de pagados los impuestos, de 8.244.000 libras (6.506.000 libras)^{vv}. Los dividendos se aumentaron de 1 chelín y 4 peniques y medio a 1 chelín y 7 peniques por cada acción de 10 chelines.

El oleoducto y la refinería

271. Se realizó un progreso notable en marzo de 1965 cuando se inauguró la refinería de Feruka llamada Central African Petroleum Refineries (CAPREF), cerca de Umtali^{ww}. Aunque pequeña si se compara con otras empresas del mundo, es sumamente compleja, pues efectúa catorce procesos distintos. Costó unos 8 millones de libras y fue patrocinada por la Shell, la British Petroleum, la Mobil, la Caltex, la Total, la American Independent Oil Co. (Aminoil) y la Kuwait National Petroleum Company. Las cinco primeras empresas petroleras citadas, por conducto de sus compañías de comercialización en Rhodesia, han puesto el 80% del capital y suministran el 80% del petróleo crudo proporcionalmente al valor de las compras del producto refinado que hacen sus compañías locales. La Aminoil y la Kuwait NPC tienen el 20% de las acciones ordinarias y suministran el 20% del petróleo crudo. La principal contratista del oleoducto fue The Hume Pipe Co. (South Africa Ltd.)^{xx}.

272. Las obras de la refinería de Feruka, situada a unos 20 kilómetros de la frontera de Rhodesia con Mozambique, se iniciaron en mayo de 1963, aproximadamente al mismo tiempo que se empezaba a construir el oleoducto de 288 kilómetros desde Beira hasta la refinería, cuya construcción costó 3 millones de dólares. El oleoducto tiene una capacidad de 3.500.000 galones aproximadamente. La estación de bombeo inyecta unos 600.000 galones al día, pero se proyectaba que, para 1971, se habrían construido dos bombas más y podrían entregarse 1.500.000 galones diarios. Las cinco compañías de comercialización efectúan la distribución por ferrocarril, desde Feruka a sus respectivos depósitos repartidos por Rhodesia y Zambia. La Lonrho Ltd., empresa británica, tuvo a su cargo el tendido del oleoducto.

B. Association of Rhodesian Industries (ARNI)

273. Los miembros de la Association of Rhodesian Industries (Asociación de Industrias de Rhodesia) son empresas manufactureras que normalmente están obligadas a afiliarse a sus respectivas cámaras de industria locales. Los estatutos de la ARNI prevén la afiliación de empresas aisladamente como miembros directos. Varias asociaciones de fabricantes son miembros afiliados de la ARNI. Además, las empresas no manufactureras que tienen intereses importantes en las actividades industriales de Rhodesia (bancos, grupos mineros, consultores de industrias) pueden ser admitidos como miembros industriales.

274. La ARNI tiene su propia secretaría. Esta dedica buena parte de su trabajo a prestar servicios personales a los distintos industriales individuales, en materias tales como la presentación de solicitudes de protección arancelaria; reducciones y suspensión de derechos arancelarios; solicitud de derechos de *dumping* y de licencias de importación y exportación; información y asesoramiento sobre mercados de exportación y localización de representantes adecuados; investigaciones sobre problemas de licencias comerciales; interpretación de la legislación laboral y otras disposiciones; localización de las fuentes de materias primas; estudio de problemas de tráfico ferroviario, etc. La secretaría hace constantemente gestiones ante los departamentos del Gobierno, los representantes locales de gobiernos extranjeros, los municipios y otras instituciones.

C. Association of Chambers of Commerce of Rhodesia (ACCOR)

275. Los fines principales de la Association of Chambers of Commerce of Rhodesia (Asociación de Cámaras de Co-

^{pp} *The Cape Times*, Suplemento de Rhodesia, 7 de agosto de 1965, pág. 5.

^{qq} *The Cape Times*, 29 de agosto de 1965; *The Star* (Johannesburgo), 30 de agosto de 1965, y *East Africa and Rhodesia*, 23 de septiembre de 1965.

^{rr} *East Africa and Rhodesia*, 26 de agosto de 1965, pág. 12.

^{ss} *Industry and Commerce of Rhodesia* 1964/65, pág. III.

^{tt} *The Financial Times*, 9 de octubre de 1965.

^{uu} *East Africa and Rhodesia*, 1° de julio de 1965, pág. 704.

^{vv} *Ibid.*, 8 de abril de 1965, pág. 516.

^{ww} *The Cape Times*, Suplemento de Rhodesia, 7 de agosto de 1965, pág. 6.

^{xx} *East Africa and Rhodesia*, 8 de abril de 1965, pág. 515.

mercio de Rhodesia), que comprende 11 cámaras, a saber, las de Bindura, Bulawayo, Fort Victoria, Gatooma, Gwelo, Hartley, Kuroi, Que Que, Salisbury y Umtali, son "mantener condiciones tales que permitan a los medios financieros operar con beneficio y sin control gubernamental innecesario, o sea unas condiciones en las cuales pueda florecer la empresa privada y ésta sea capaz de satisfacer las necesidades de una población en aumento y proporcionar empleo a una fuerza de trabajo cada vez mayor", así como "mantener dinámica y en expansión la economía y fomentar la confianza en sí mismos y la iniciativa individual. La ACCOR no favorece la intervención ante el Gobierno para obtener asistencia o trato es-

pecial. Antes bien, trata de garantizar que el Gobierno no se oponga a la empresa privada en sus esfuerzos para ayudarse a sí misma".

D. Transporte y energía

276. Las tres herencias que quedan de la Federación, a saber, los ferrocarriles, la Corporación de Líneas Aéreas del Africa central y las centrales eléctricas del embalse de Kariba, son entidades legalmente constituidas, de propiedad parcial de los distintos gobiernos y sujetas a la supervisión de organismos superiores en los cuales están representados los gobiernos.

VI. COMERCIO EXTERIOR

A. Generalidades

277. En el cuadro siguiente se resume el comercio exterior de los últimos años:

RESUMEN HISTÓRICO DEL COMERCIO EXTERIOR

(En millares de libras esterlinas)

Período	Importaciones	Exportaciones internas				Ventas netas de oro	Reexportaciones	Total de exportaciones	Balanza visible
		A Zambia	A Malawi	A otros países	Total				
1950	58.762	3.442	452	30.371	34.265	6.376	7.500	48.141	-10.621
1951	85.634	4.647	498	30.762	35.907	5.990	9.776	51.673	-33.961
1952	88.378	6.028	437	38.021	44.486	6.552	10.101	61.139	-27.239
1953	77.675	7.682	561	39.115	47.358	6.595	11.484	65.437	-12.238
1954	42.980	...	6.547
1955	45.154	...	6.486
1956	47.829	...	6.483
1957	52.725	...	6.854
1958	49.351	...	6.772
1959	57.401	...	6.931
1960	61.919	...	6.961
1961	71.254	...	7.091
1962	72.827	...	6.845
1963	75.089	...	6.980
1964	109.695	30.825	5.581	83.059	119.465	7.086	17.993	144.544	+34.849
1964 Enero	8.074	1.497	167	3.411	5.075	574	1.263	6.912	-1.162
Febrero ...	8.137	2.131	322	3.369	5.822	556	1.291	7.669	-468
Marzo	8.620	2.123	326	4.402	6.851	579	1.319	8.749	+129
Abril	9.203	2.748	443	5.810	9.001§	557	1.386	10.944	+1.741
Mayo	8.992	2.741	473	8.175	11.389	617	1.365	13.371	+4.379
Junio	10.425	2.773	522	8.699	11.994	579	1.323	13.896	+3.471
Julio	10.290	2.539	517	8.988	12.044	562	1.569	14.175	+3.885
Agosto	9.445	2.509	607	9.095	12.211	623	1.623	14.457	+5.012
Septiembre .	9.370	3.084	568	10.119	13.771	638	1.738	16.147	+6.777
Octubre ...	9.206	3.149	586	8.694	12.429	523	1.743	14.695	+5.489
Noviembre .	8.597	2.919	508	7.641	11.068	591	1.525	13.184	+4.587
Diciembre .	9.241	2.808	505	5.092	8.405	684	1.728	10.817	+1.576
1965 Enero	8.429	2.169	385	4.016	6.570	578	1.399	8.547	+118
Febrero ...	8.164	2.528	382	4.239	7.149	572	1.343	9.064	+900
Marzo	10.236	3.209	549	5.201	8.959	580	1.552	11.091	+855
Abril	9.691	2.674	570	6.892	10.136	543	1.234	11.913	+2.222
Mayo	11.276	3.228	735	8.915	12.878	562	1.414	14.854	+3.578
Junio	11.031§	3.436	848	10.170	14.454§	519	1.442§	16.415§	+5.384§
Julio	10.690	3.235	693	10.057	13.985	586	1.486	16.057	+5.367
Agosto	11.279	3.441	768	10.105	14.314	542	1.519	16.375	+5.096
Septiembre .									
Octubre ...									
Noviembre .									
Diciembre ..									

278. Se advertirá que, en lo que se refiere a importaciones, a exportaciones a Zambia y Malawi, y a reexportaciones, no hay cifras correspondientes a los años de 1954 a 1963 inclusive, pues las estadísticas comerciales se llevaban para la Federación de Rhodesia y Nyasalandia en su conjunto, y no se registraban los movimientos entre los territorios componentes de la Federación.

279. En 1964, la balanza de comercio visible de Rhodesia del Sur arrojó un superávit de 34.900.000 libras esterlinas. En el primer semestre de 1965, el superávit fue de 13.900.000 libras esterlinas, que representa un mejoramiento de un 60% respecto a la cifra de 8.100.000 libras esterlinas correspondiente al mismo período de 1964.

B. Actividad comercial, por grupos de mercaderías

Importaciones

280. Las importaciones de Rhodesia del Sur se pueden clasificar, conforme a los grupos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, Modificada, del siguiente modo:

Grupo	1964	
	Millones de libras esterlinas	Porcentaje
0. Productos alimenticios y animales vivos	9,7	8,8
1. Bebidas y tabaco	3,7	3,4
2. Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	5,5	5,0
3. Combustible y lubricantes minerales y productos conexos	6,2	5,6
4. Aceites y mantecas de origen animal y vegetal	0,6	0,5
5. Productos químicos	11,5	10,5
6. Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	28,1	25,6
7. Maquinaria y material de transporte	31,2	28,5
8. Artículos manufacturados diversos	10,7	9,7
9. Mercaderías y transacciones, n.e.p.	2,6	2,4
TOTAL	109,7	100,0

Fuente: Rhodesia. *Annual Statement of External Trade*, 1964, pág. xi.

281. Las veinticinco mercaderías que encabezaban la lista de importaciones de Rhodesia del Sur en 1964 eran las siguientes:

Mercadería	1964
	Millones de libras esterlinas
Tejidos de fibras textiles, en piezas	7,0
Maquinaria, n.e.p., excepto la eléctrica	6,6
Productos derivados del petróleo	5,8
Hierro o acero, en barras, ángulos, tubos o rieles, etc.	5,2
Vestuario y mercería	3,7
Repuestos de vehículos automotores, n.e.p., inclusive partes para montar	3,6
Abonos manufacturados	3,1
Vehículos automotores para pasajeros	2,9
Tabaco en bruto	2,8
Papel y cartón	2,6
Maquinaria para la agricultura	2,5

Mercadería	1964
	Millones de libras esterlinas
Camiones automotores y chasis de camiones.	2,2
Maquinaria generadora de fuerza, excepto la eléctrica	2,1
Trigo	1,9
Aparatos de telecomunicaciones	1,8
Productos medicinales y farmacéuticos	1,7
Motores y material rodante para ferrocarriles	1,6
Cobre y sus aleaciones	1,6
Baños, desinfectantes e insecticidas	1,6
Elementos y compuestos químicos	1,5
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e.p.	1,4
Hilados e hilos de fibras textiles	1,3
Calzado	1,1
Instrumentos y aparatos científicos, médicos, ópticos, etc.	1,0
Troncos, rollizos y trozas de madera	1,0
	67,5

Esto representa el 61,5% de las importaciones.

Fuente: Rhodesia. *Annual Statement of External Trade*, 1964, pág. xii.

Exportaciones

282. Las exportaciones de Rhodesia del Sur se pueden clasificar del modo siguiente:

Grupo	1964	
	Millones de libras esterlinas	Porcentaje
0. Productos alimenticios y animales vivos	11,9	10,0
1. Bebidas y tabaco	42,0	35,1
2. Materiales crudos no combustibles, excepto los combustibles	16,8	14,1
3. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos	6,4	5,4
4. Aceites y mantecas de origen animal y vegetal	0,4	0,3
5. Productos químicos	4,5	3,8
6. Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	21,0	17,5
7. Maquinaria y material de transporte	6,3	5,3
8. Artículos manufacturados diversos	8,9	7,4
9. Mercaderías y transacciones, n.e.p.	1,2	1,1
TOTAL	119,5	100,0

FUENTE: Rhodesia. *Annual Statement of External Trade*, 1964, pág. xi.

283. Los veinticinco productos que encabezaban la lista de exportaciones de Rhodesia del Sur en 1964 eran los siguientes:

Mercadería	1964
	Millones de libras esterlinas
Tabaco en bruto	39,2
Fibra de amianto	10,0
Vestuario	5,3
Cobre refinado sin forjar	3,6

<i>Mercadería</i>	<i>1964</i>
	<i>Millones de libras esterlinas</i>
Azúcar sin refinar	3,4
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas	3,0
Hierro en bruto	2,6
Mineral de cromo	2,5
Carnes envasadas y preparados de carne, n.e.p.	2,1
Ferrocromo	1,8
Cigarrillos	1,8
Aparatos de radio	1,7
Carbón	1,7
Calzado	1,6
Vehículos automotores para pasajeros	1,4
Tejidos de fibras textiles	1,2
Piezas estructurales de acero y piezas estructurales acabadas	1,0
Neumáticos (llantas) y cámaras de caucho	1,0
Barras y varillas de cobre	1,0
Jabones y detergentes	1,0
Cueros y pieles	0,9
Barras, varillas, ángulos, etc., de hierro o acero	0,7
Extracto de acacia	0,7
Abonos	0,7
Hierro o acero en desbastes cuadrados o rectangulares y palanquilla	0,6
TOTAL	90,3

Estas exportaciones representaron el 75,6% del valor total de las exportaciones internas.

FUENTE: *Rhodesia. Annual Statement of External Trade, 1964*, pág. xiii.

Reexportaciones

284. Las reexportaciones de mercaderías importadas por Rhodesia del Sur se pueden clasificar así:

	<i>1964</i>	
<i>Sección</i>	<i>Millones de libras esterlinas</i>	<i>Porcentaje</i>
0. Productos alimenticios y animales vivos	0,6	3,4
1. Bebidas y tabaco	0,5	2,9
2. Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	0,4	2,1
3. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos.	0,4	2,0
4. Aceites y mantecas de origen animal y vegetal	0,0	0,1
5. Productos químicos	1,8	10,2
6. Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	3,2	17,7
7. Maquinaria y material de transporte	6,5	36,0
8. Artículos manufacturados diversos	1,6	9,0
9. Mercaderías y transacciones, n.e.p.	3,0	16,7
TOTAL	18,0	100,0

C. Origen de las importaciones y destino de las exportaciones: lista selecta

Importaciones

285. Las importaciones cuyo origen se analiza en esta sección son las que alcanzaron, en cifras redondas, un valor de un millón o más de libras esterlinas en 1964.

ORIGEN PRINCIPAL DE LAS IMPORTACIONES MÁS IMPORTANTES EN 1964

	<i>Valor (millones de libras esterlinas)</i>	<i>Porcentaje</i>
Trigo		
Australia	1,5	81,1
Estados Unidos	0,3	15,1
Otros países	0,1	3,8
TOTAL	1,8	100,0
Maíz		
Sudáfrica	1,0	100,0
Otros países	0,0	—
TOTAL	1,0	100,0
Tabaco en bruto		
Zambia ^a	2,5	88,8
Malawi	0,3	11,1
Otros países	0,0	—
TOTAL	2,8	100,0
Productos derivados del petróleo		
Irán	3,1	54,4
Bahrein	0,7	12,3
Sudáfrica	0,7	12,3
Arabia Saudita	0,5	8,7
Otros países	0,7	12,3
TOTAL	5,7	100,0
Insecticidas		
Sudáfrica	0,5	35,8
Estados Unidos	0,5	32,6
Israel	0,1	7,3
Kenia	0,1	5,6
Otros países	0,3	18,6
TOTAL	1,4	100,0
Abonos nitrogenados		
República Federal de Alemania ..	0,5	52,3
Países Bajos	0,2	17,4
Portugal	0,2	15,7
Otros países	0,1	14,6
TOTAL	1,0	100,0
Telas de algodón		
Japón	1,0	37,2
Reino Unido	0,7	28,8
Estados Unidos	0,2	6,5
Países Bajos	0,2	6,5
Otros países	0,5	20,8
TOTAL	2,6	100,0

^a El tabaco de Zambia se importa para subastarlo, y se re-exporta luego en su mayor parte.

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Telas de rayón</i>		
Japón	0,9	51,6
Reino Unido	0,3	16,5
China	0,2	8,9
Otros países	0,4	22,8
TOTAL	1,8	100,0
<i>Cobre y sus aleaciones, n.e.p.</i>		
Zambia	1,2	93,4
Otros países	0,1	6,6
TOTAL	1,3	100,0
<i>Piezas de repuesto de motores de combustión interna, n.e.p.</i>		
Reino Unido	1,0	67,1
Estados Unidos	0,2	11,7
Sudáfrica	0,1	7,0
República Federal de Alemania..	0,1	5,5
Otros países	0,1	8,8
TOTAL	1,5	100,0
<i>Tractores</i>		
Reino Unido	1,1	74,4
Estados Unidos	0,4	25,0
Otros países	0,0	0,7
TOTAL	1,5	100,0
<i>Maquinaria no especificada de otra manera</i>		
Reino Unido	1,7	54,0
Sudáfrica	0,5	15,9
República Federal de Alemania	0,2	7,5
Otros países	0,7	22,7
TOTAL	3,1	100,0
<i>Locomotoras</i>		
Reino Unido	1,0	97,9
Otros países	0,1	2,1
TOTAL	1,1	100,0
<i>Vehículos automotores para pasajeros</i>		
Reino Unido	1,1	37,9
República Federal de Alemania..	0,5	18,6
Italia	0,3	10,2
Francia	0,3	8,9
Japón	0,2	8,4
Otros países	0,5	16,0
TOTAL	2,9	100,0
<i>Piezas de vehículos automotores, inclusive piezas para montar</i>		
Reino Unido	3,0	82,7
Sudáfrica	0,2	5,0
Otros países	0,4	12,3
TOTAL	3,6	100,0

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Chasis para camiones y camionetas</i>		
Reino Unido	1,1	69,8
Sudáfrica	0,2	14,6
Otros países	0,2	15,7
TOTAL	1,6	100,0
<i>Ropa exterior</i>		
Sudáfrica	0,6	45,2
Reino Unido	0,4	35,7
Otros países	0,2	19,1
TOTAL	1,3	100,0
<i>Destino de las exportaciones</i>		
286. Los productos o grupos de productos cuyo destino se analiza aquí son aquellos cuyo valor total ascendió en 1964 a 500.000 libras esterlinas como mínimo.		
	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Tabaco en bruto</i>		
Reino Unido	20,7	52,7
República Federal de Alemania	5,4	13,9
Países Bajos	1,8	4,7
Japón	1,5	3,3
Australia	1,2	3,1
Bélgica	0,8	2,1
Sudáfrica	0,6	1,6
Malasia	0,7	1,7
Dinamarca	0,5	1,3
Suiza	0,4	1,1
Hong Kong	0,4	1,1
Singapur	0,4	1,1
Francia	0,3	0,9
Portugal	0,3	0,7
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas	0,3	0,7
República Árabe Unida	0,3	0,6
Nueva Zelandia	0,2	0,6
Noruega	0,2	0,6
Italia	0,2	0,6
Jamaica	0,2	0,6
Austria	0,2	0,6
Otros países	2,5	6,4
TOTAL	39,2	100,0
<i>Tabaco manufacturado</i>		
Sudáfrica	0,9	42,5
Zambia	0,5	38,8
Estados del Golfo Pérsico	0,3	13,6
Otros países	0,1	5,0
TOTAL	1,8	100,0
<i>Asbesto en bruto</i>		
Reino Unido	3,3	32,5
Estados Unidos	1,1	11,0
República Federal de Alemania	0,9	9,3
España	0,6	6,0

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
Sudáfrica	0,4	4,2
India	0,4	4,2
Japón	0,4	3,5
Bélgica	0,3	3,3
Suecia	0,3	2,7
Francia	0,2	2,5
Italia	0,2	2,1
Otros países	1,9	18,7
TOTAL	10,0	100,0

Carnes frescas, refrigeradas o congeladas

Reino Unido	1,2	41,5
Italia	0,6	19,8
Zambia	0,5	18,0
Suiza	0,3	11,0
Otros países	0,3	9,7
TOTAL	3,0	100,0

Otras carnes

Reino Unido	1,4	68,7
Sudáfrica	0,2	9,5
Zambia	0,2	8,7
Canadá	0,1	4,0
Otros países	0,2	9,1
TOTAL	2,1	100,0

Cobre

Bélgica	1,3	28,6
República Federal de Alemania..	1,2	27,0
Reino Unido	0,7	16,5
Otros países	1,3	28,0
TOTAL	4,5	100,0

Electricidad

Zambia	4,2	100,0
--------------	-----	-------

Azúcar

Canadá	1,0	27,7
Reino Unido	0,9	27,6
Zambia	0,9	25,6
Malawi	0,3	9,8
Estados Unidos	0,3	9,3
TOTAL	3,4	100,0

Mineral de cromo

Estados Unidos	1,7	66,4
Sudáfrica	0,3	12,5
Suecia	0,1	5,8
Reino Unido	0,1	3,8
Otros países	0,3	11,2
TOTAL	2,5	100,0

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Automóviles y camiones</i>		
Zambia	1,8	79,2
Malawi	0,4	19,2
Otros países	0,0	1,6
TOTAL	2,2	100,0

Carbón y coque

Zambia	1,5	70,0
República Democrática del Congo	0,4	20,1
Otros países	0,2	9,9
TOTAL	2,1	100,0

Ferrocromo

Reino Unido	0,8	44,0
Australia	0,3	15,7
Japón	0,2	13,1
Canadá	0,2	11,4
Otros países	0,3	15,8
TOTAL	1,8	100,0

Aparatos de radio

Sudáfrica	1,0	59,2
Zambia	0,4	23,9
Malawi	0,1	6,4
Otros países	0,2	10,6
TOTAL	1,7	100,0

Calzado

Zambia	0,9	57,8
Sudáfrica	0,4	27,8
Malawi	0,1	8,6
Otros países	0,2	5,8
TOTAL	1,6	100,0

Hierro o acero en palanquillas, lingotes, barras, ángulos, etc.

Zambia	0,6	42,5
Reino Unido	0,3	24,0
Sudáfrica	0,3	22,3
Otros países	0,2	11,1
TOTAL	1,4	100,0

Papel, cartón, manufacturas de papel, etc.

Zambia	0,8	70,1
Malawi	0,2	17,9
Otros países	0,2	12,0
TOTAL	1,2	100,0

Jabón, etc.

Zambia	1,1	90,9
Malawi	0,1	4,4
Otros países	0,1	4,7
TOTAL	1,3	100,0

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Tejidos por piezas</i>		
Malawi	0,6	52,0
Zambia	0,5	43,6
Otros países	0,1	4,4
TOTAL	1,2	100,0
<i>Acero para estructuras</i>		
Zambia	0,7	65,0
Malawi	0,1	9,0
República Democrática del Congo	0,0	3,3
Otros países	0,2	22,7
TOTAL	1,0	100,0
<i>Manufacturas de caucho</i>		
Zambia	0,7	68,2
Malawi	0,3	25,0
Otros países	0,1	6,8
TOTAL	1,0	100,0
<i>Extracto de mimosa</i>		
India	0,5	71,1
República Árabe Unida	0,1	10,2
Otros países	0,1	18,7
TOTAL	0,7	100,0
<i>Abonos</i>		
Zambia	0,5	78,2
Malawi	0,1	15,5
Otros países	0,0	6,3
TOTAL	0,7	100,0
<i>Pinturas, barnices, etc.</i>		
Zambia	0,5	78,1
Malawi	0,1	17,2
Otros países	0,0	4,7
TOTAL	0,6	100,0
<i>Estañó en lingotes</i>		
Sudáfrica	0,6	98,8
Otros países	0,0	1,2
TOTAL	0,6	100,0
<i>Mineral de litio</i>		
Estados Unidos	0,3	50,8
Otros países	0,3	49,2
TOTAL	0,5	100,0
<i>Cueros de ganado vacuno</i>		
Italia	0,1	16,9
Irán	0,1	14,5
Portugal	0,1	13,2
República Federal de Alemania..	0,1	9,4
Checoslovaquia	0,0	9,0
República Democrática del Congo	0,0	8,2
Otros países	0,2	28,9
TOTAL	0,5	100,0

	Valor (millones de libras esterlinas)	Porcentaje
<i>Ale, cerveza y cerveza negra fuerte</i>		
Malawi	0,3	72,2
Bechuania	0,1	16,2
Zambia	0,1	11,6
TOTAL	0,5	100,0
<i>Míneral de hierro</i>		
Japón	0,4	99,8
TOTAL	0,4	100,0

D. *Origen de las importaciones y destino de las exportaciones: comercio con todos los países*

Generalidades

287. El comercio de Rhodesia del Sur con todos los países en 1964 puede resumirse así:

	Importaciones	Exportaciones	Reexportaciones
(Millones de libras esterlinas)			
Reino Unido	33,4	30,5	0,7
Zambia	5,4	30,8	9,9
Sudáfrica	26,6	9,0	3,3
Malawi	1,6	5,6	1,6
Australia	2,4	1,6	0,0
India	0,9	1,0	0,0
Bechuania	0,3	1,1	0,9
Hong Kong	0,5	0,5	0,0
Otros países del área de la esterlina	2,4	4,3	0,2
TOTAL del área de la esterlina	73,7	84,4	16,8
Estados Unidos	7,4	4,0	0,0
Canadá	1,6	1,4	0,0
Otros países del área del dólar	0,0	0,1	0,0
TOTAL de los países del área del dólar ..	9,0	5,5	0,1
República Federal de Alemania	4,3	7,9	0,0
Francia	1,7	0,7	0,0
Países Bajos	2,4	2,2	0,0
Italia	2,0	1,3	0,1
Europa, n.e.p.	4,5	7,2	0,1
Mozambique	1,4	0,7	0,5
Angola	0,1	0,1	0,1
República Democrática del Congo	0,0	1,5	0,2
Países africanos, n.e.p.	0,4	0,6	0,0
Japón	4,4	5,6	0,0
Área soviética	0,4	0,9	0,0
Otros países	5,0	0,7	0,0
TOTAL del resto del mundo	26,5	29,5	1,2
TOTAL mundial	109,6	119,5	18,0

E. Comercio con determinados países

Reino Unido

288. El Reino Unido es la fuente principal de importaciones y el segundo de los mercados de exportación de Rhodesia del Sur. En el cuadro siguiente se dan detalles del comercio entre los dos países:

Importaciones

En millones de libras

Maquinaria y material de transporte.....	17,0
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	7,2
Artículos manufacturados diversos.....	4,1
Productos químicos	2,2
Otras importaciones	5,0
TOTAL de importaciones	35,5

Exportaciones

Tabaco en bruto	20,7
Asbesto en bruto	3,3
Vaca y ternera, congeladas o refrigeradas..	1,2
Conservas de carne	1,2
Azúcar sin refinar	0,9
Ferroaleaciones	0,8
Cobre	0,7
Todas las demás exportaciones	1,7
Exportaciones internas	30,5
Reexportaciones	0,7
TOTAL de exportaciones	31,2

Zambia

289. Zambia es el mercado principal para las exportaciones de Rhodesia del Sur, sobre todo para las no agrícolas, pero tiene relativamente poca importancia como fuente de importaciones. En el cuadro siguiente se dan detalles del comercio entre los dos países:

Importaciones

En millones de libras

Tabaco en bruto	2,5*
Cobre electrolítico	1,2
Todas las demás importaciones	1,7
TOTAL de importaciones	5,4

Exportaciones

Electricidad	4,2
Ropa exterior	2,0
Carbón	1,3
Automóviles para pasajeros	1,2
Azúcar sin refinar	0,9
Jabón, etc.	0,9
Camisas	0,8
Neumáticos y cámaras de caucho	0,7
Piezas estructurales acabadas, de metal, n.e.p.	0,7
Piezas, etc., de hierro o acero	0,6

En millones de libras

Carnes frescas, congeladas o refrigeradas..	0,5
Cigarrillos	0,5
Abonos	0,5
Todas las demás exportaciones	16,0
Exportaciones internas	30,8
Reexportaciones	9,9
TOTAL de exportaciones	40,7

290. Que el comercio de Zambia depende de Rhodesia del Sur lo demuestra el hecho de que, en 1964, el 39,41% del total de las importaciones provino de dicho Territorio. La electricidad y el carbón son factores vitales en la economía de Zambia, que depende casi exclusivamente de Rhodesia del Sur para llenar sus necesidades de ambos.

291. La estructura del tráfico comercial entre Rhodesia del Sur y Zambia durante el año 1965 muestra un aumento de las importaciones en los primeros meses de dicho año. Las exportaciones de Rhodesia del Sur a Zambia, en enero-marzo de 1964 y de 1965 se evaluaron en 5.765.000 y 7.906.000 libras, respectivamente. Las importaciones procedentes de Zambia aumentaron también, desde 886.000 libras en enero-marzo de 1964 a 1.035.000 libras en igual período de 1965.

Sudáfrica

292. Sudáfrica es, por su importancia, el tercer mercado de Rhodesia del Sur. Sin embargo, la balanza comercial visible de esta última con aquélla es bastante desfavorable. El cuadro siguiente da detalles del comercio entre ambos países:

Importaciones

En millones de libras

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	9,0
Maquinaria y material de transporte.....	4,7
Productos alimenticios	3,7
Productos químicos	3,6
Artículos manufacturados diversos	3,3
Combustibles minerales, etc.	0,9
Materiales crudos, no comestibles, excepto los combustibles	0,9
Todas las demás importaciones	0,5
TOTAL de importaciones	26,6

Exportaciones

Prendas de vestir	1,2
Radorreceptores y sus piezas	1,0
Cigarrillos	0,9
Tabaco en bruto	0,6
Estaño	0,6
Asbesto en bruto	0,4
Mineral y concentrados de cromo	0,3
Exportaciones de acero	0,3
Todas las demás exportaciones	5,6
Exportaciones internas	10,9
Reexportaciones	3,3
TOTAL de exportaciones	14,2

293. La estructura del comercio de Rhodesia del Sur con Sudáfrica durante los tres primeros meses de 1965 muestra un aumento sobre las cifras de 1964. En enero-marzo de 1965,

* Probablemente para su venta en las subastas de Salisbury y ulterior reexportación.

Rhodesia del Sur importó de Sudáfrica mercancías por valor de 6.383.000 libras, frente a 5.694.000 durante igual período del año anterior.

294. En enero-marzo de 1965, las exportaciones ascendieron a 2.566.000 libras, frente a 1.713.000 durante igual período del año anterior.

Malawi

295. Rhodesia del Sur tuvo en 1964 un superávit de 5.600.000 libras esterlinas en su balanza comercial con Malawi, superávit que se debió principalmente a las exportaciones de artículos manufacturados. Malawi obtuvo de Rhodesia el 39,1% del total de sus importaciones. Aunque las exportaciones de Malawi a Rhodesia del Sur no fueron sino una pequeñísima proporción de las importaciones de Rhodesia del Sur, representaron el 13,9% del total de exportaciones de Malawi. El siguiente cuadro expone detalles del comercio entre ambos países:

Importaciones

En millones de libras

Fibra de algodón	0,6
Tabaco en bruto	0,3
Té	0,2
Habas, guisantes, etc., secos	0,2
Todas las demás importaciones	0,3
TOTAL de importaciones	1,6

Exportaciones

Telas de algodón	0,5
Azúcar sin refinar	0,3
Ale, cerveza y cerveza negra fuerte.....	0,3
Camisas	0,2
Ropa exterior	0,2
Azúcar refinado	0,2
Automóviles para pasajeros	0,2
Todas las demás exportaciones	3,7
Exportaciones internas	5,6
Reexportaciones	1,6
TOTAL de exportaciones	7,2

Estados Unidos de América

296. En 1964, la balanza comercial de Rhodesia del Sur con los Estados Unidos arrojó un déficit de 3.404.000 libras esterlinas (las importaciones procedentes de los Estados Unidos representaron 7.426.000 libras, es decir, el 6,77% del valor total de las importaciones; las exportaciones a los Estados Unidos representaron 4.022.000 libras, o sea el 2,78% del valor total de las exportaciones, incluyendo las reexportaciones).

Importaciones

En millones de libras

Maquinaria y material de transporte	3,4
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	1,1
Productos químicos	1,1
Artículos manufacturados diversos	1,0
Productos alimenticios (principalmente trigo, arroz y leche en polvo)	0,5
Otras importaciones	0,3
TOTAL de importaciones	7,4

Exportaciones

En millones de libras

Mineral de cromo	1,7
Asbesto en bruto	1,1
Azúcar sin refinar	0,3
Mineral de litio	0,3
Cobre refinado	0,2
Todas las demás exportaciones	0,4
Exportaciones internas	4,0
Reexportaciones	0,0
TOTAL de exportaciones	4,0

297. La actividad comercial entre Rhodesia del Sur y los Estados Unidos mostró un ligero descenso en los tres primeros meses de 1965.

298. Las importaciones procedentes de los Estados Unidos en enero-marzo de 1964 ascendieron a 1.578.000 libras, y a 1.492.000 en enero-marzo de 1965. Las exportaciones de Rhodesia del Sur a los Estados Unidos en enero-marzo de 1964 representaron 905.000 libras, frente a 654.000 en igual período de 1965.

República Federal de Alemania

299. El cuadro que sigue da los detalles del comercio con la República Federal de Alemania, que absorbió el 40,8% de las exportaciones de Rhodesia del Sur a la Europa occidental; de las importaciones de Rhodesia del Sur procedentes de esa región, el 29,1% correspondieron a Alemania occidental:

Importaciones

En millones de libras

Maquinaria y material de transporte.....	1,6
Productos químicos (principalmente abonos)	1,3
Otras importaciones	1,4
TOTAL de importaciones	4,3

Exportaciones

Tabaco en bruto	5,5
Cobre refinado	1,2
Asbesto en bruto	0,9
Todas las demás exportaciones	0,3
Exportaciones internas	7,9
Reexportaciones	0,0
TOTAL de exportaciones	8,0

Japón

300. El comercio de Rhodesia del Sur con el Japón arroja ligero superávit, que en 1964 ascendió a 1.104.000 libras. Las exportaciones al Japón en 1964 ascendieron a 5.583.000 libras, es decir, el 3,86% del valor total de las exportaciones, incluso las reexportaciones; las importaciones representaron 4.399.000 libras, o sea el 4,01% del valor total de las importaciones.

301. El comercio de Rhodesia del Sur con el Japón consiste esencialmente en importar bienes de consumo japoneses y exportar tabaco y minerales, sobre todo mineral de hierro. La riqueza de este mineral, y su precio competitivo, han atraído a los compradores japoneses, especialmente porque el mineral que exporta Rhodesia es una hematita rica, y muy baja en fósforo. En general, su contenido de hierro es del 60% o más⁷⁷. La siguiente tabla da detalles del comercio entre ambos países:

⁷⁷ The Star (Johannesburgo), 12 de febrero de 1965.

*Importaciones**En millones de libras*

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (en especial, vestuario)	2,8
Maquinaria y material de transporte	0,8
Todas las demás importaciones.....	0,8
TOTAL de importaciones	4,4

Exportaciones

Hierro en bruto	2,5
Tabaco en bruto	1,5
Asbesto en bruto	0,4
Mineral de hierro y sus concentrados	0,4
Ferroaleaciones	0,2
Concentrados de cobre	0,2
Todas las demás exportaciones	0,5
Exportaciones internas	5,7
Reexportaciones	0,0
TOTAL de exportaciones	5,7

302. La estructura del comercio durante los tres primeros meses de 1965, comparada con la de los tres primeros meses de 1964, muestra un aumento de importaciones procedentes del Japón y una disminución de las exportaciones al Japón. En enero-marzo de 1964, las importaciones de Rhodesia del Sur procedentes del Japón representaron 1.023.000 libras esterlinas, y 1.353.000 en enero-marzo de 1965. En enero-marzo de 1964, Rhodesia del Sur exportó al Japón mercancías por valor de 1.165.000 libras, frente a 952.000 libras en igual período de 1965.

Mozambique

303. El comercio entre Rhodesia del Sur y Mozambique no es de gran volumen. Por la importancia de Mozambique para las comunicaciones de Rhodesia del Sur, y dado que la mayor parte de su comercio exterior atraviesa Mozambique, se dan a continuación algunos detalles del comercio entre ambos territorios:

*Importaciones**En millones de libras*

Electricidad	0,3
Materias destinadas a la alimentación de animales	0,2
Traviesas de madera	0,2
Tablas aserradas	0,2
Aceite de coco	0,1
Frutas frescas	0,1
Todas las demás importaciones	0,3
TOTAL de importaciones	1,4

Exportaciones

Tabaco en bruto	0,1
Maquinaria y piezas de máquinas ..	0,1
Maíz	0,1
Todas las demás exportaciones	0,5
Exportaciones internas	0,7
Reexportaciones	0,5
TOTAL de exportaciones	1,2

304. La importancia de Mozambique como vía comercial hacia Rhodesia del Sur aumentó a comienzos de 1965, al entrar en funcionamiento el oleoducto entre Beira y Umtali.

VII. MANO DE OBRA

A. La legislación del trabajo

Generalidades

305. Las condiciones de trabajo en la industria se rigen por un amplio cuerpo de legislación. El estatuto de aplicación general más importante es la *Industrial Conciliation Act* (cap. 246) de 1959, en su forma enmendada, que establece procedimientos para la negociación, la conciliación y el arbitraje de todas las cuestiones que afectan al empleo en la mayoría de las industrias, oficios y ocupaciones. Parte de la legislación, como la *Masters and Servants Act* (cap. 247) de 1901, en su forma enmendada, y la *African (Urban Areas) Accommodation and Registration Act* (cap. 110) de 1951, se aplica o afecta solamente a los africanos.

*Conciliación industrial*a) *Procedimientos*

306. La primera *Industrial Conciliation Act*, que entró en vigencia en 1934, reconocía el principio de la negociación colectiva estableciendo normas para la creación de consejos industriales nacionales y locales representativos de los empleadores y los empleados. Los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empleadores tenían derecho a inscribirse en un registro establecido por la ley. Los africanos no estaban incluidos dentro del alcance de la ley; sus tasas de salarios se fijaban, en ciertas circunstancias, por proclamación del Gobernador. Estas proclamaciones, que se hacían a solicitud de los consejos industriales, protegían el alto nivel de los salarios de los trabajadores no africanos.

307. Una segunda ley de conciliación industrial, que entró en vigencia en 1945, establecía procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. En condiciones especificadas, el acuerdo alcanzado por un consejo industrial, en el que no estaban representados los trabajadores africanos, podía extenderse a los africanos dentro de ciertos municipios. En general, las condiciones de empleo de los africanos se regían por la *Native Labour Boards Act* de 1947, que establecía una Junta Nacional de Trabajo y dos Juntas Regionales de Trabajo, encargadas de evitar y resolver los conflictos entre los empleadores y los empleados africanos. Estas juntas formularon recomendaciones al Gobierno con respecto a las condiciones mínimas de trabajo de los trabajadores africanos. En la práctica, las normas establecidas por ley se aplicaban sobre todo a los africanos empleados en zonas municipales y administradas por la ciudad. Una nueva política se inauguró con la aprobación de una nueva *Industrial Conciliation Act* en 1959, que derogó la *Native Labour Boards Act* y estableció los mismos procedimientos de conciliación para africanos y no africanos.

308. La *Industrial Conciliation Act* (cap. 246) de 1959, en su forma enmendada, se aplica a todas las industrias, oficios y ocupaciones con las siguientes excepciones: agricultura (incluso silvicultura), servicio doméstico en casas particulares y actividades en los ferrocarriles de Rhodesia²². La *Industrial Conciliation Act* establece consejos industriales para la industria organizada y juntas industriales para las industrias en que no se han establecido consejos industriales.

309. En principio, sólo los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empleadores que se han inscrito en el registro establecido por la ley pueden formar un consejo industrial. Un sindicato de trabajadores o una organización de empleadores debe reunir las siguientes condiciones para poder inscribirse: i) que la constitución del sindicato u organización se ajuste a las disposiciones de la ley; ii) que el sindicato u organización no haya sido constituido con el fin de promover

²² El segundo apéndice de la *Rhodesia Railways Act* de 1949, en su forma enmendada, establece disposiciones especiales para los consejos industriales.

los intereses de sus miembros a base de raza, color de la piel o religión; iii) que el sindicato u organización tenga un órgano directivo situado en Rhodesia del Sur, y iv) que el sindicato u organización no permita que sus fondos o instalaciones se utilicen para fines políticos. No obstante, los sindicatos de trabajadores u organizaciones de empleadores siguen sometidos a las disposiciones de la ley aunque no satisfagan dichas condiciones de inscripción. De esa manera, una organización no registrada debe proporcionar información sobre sus finanzas al funcionario encargado del registro industrial (*industrial registrar*) y no debe utilizar sus fondos e instalaciones para promover los intereses de organizaciones políticas.

310. Sólo los sindicatos de trabajadores registrados, por una parte, y las organizaciones de empleadores registradas o los empleadores aprobados por los funcionarios encargados del registro industrial, por otra, pueden constituir un consejo industrial registrado. El sistema de los consejos industriales permite a los sindicatos y organizaciones de empleadores negociar con respecto a todas las cuestiones relativas a las condiciones de empleo; el objeto del consejo es resolver o evitar los conflictos industriales. Un acuerdo concertado por un consejo puede abarcar asuntos tales como: la tasa mínima de remuneración, incluso la forma de computar dicha tasa; las condiciones especiales de empleo que rigen para mujeres, jóvenes o aprendices; las contribuciones al sindicato, a la organización de empleadores o al consejo; el establecimiento de pensiones y de fondos para seguros de enfermedad, desempleo o de otro tipo; y medidas de seguridad y salubridad. El acuerdo logrado por un consejo puede adquirir legalmente fuerza obligatoria por orden del Ministro y aplicarse también a empleadores y empleados que no son miembros del sindicato de trabajadores o de la organización de empleadores.

311. La ley también tiene en cuenta las industrias en las que no figura ningún consejo industrial registrado. Las juntas industriales compuestas de representantes de empleadores y de empleados, presididas por un presidente neutral, se establecen a solicitud de los empleadores o de los empleados. También pueden establecerse por orden del Ministro. A base de las recomendaciones formuladas por las juntas industriales, el Ministro formula disposiciones de carácter obligatorio sobre el salario mínimo y otras condiciones de empleo.

312. En caso de que no haya consejo industrial ni junta industrial, el Ministro tiene autoridad para convocar una junta de conciliación. En general, los procedimientos y facultades de la junta de conciliación son semejantes a los del consejo industrial.

313. La ley también establece tribunales industriales para atender a las apelaciones de decisiones administrativas y, en ciertas circunstancias, para actuar como tribunal de arbitraje.

314. Un consejo industrial, una junta de conciliación o el Ministro pueden decidir que se necesita arbitraje voluntario para resolver un conflicto y en ese caso puede designarse un mediador o árbitro. El arbitraje obligatorio puede ordenarse en los siguientes casos: cuando surge una disputa que afecta a ciertos servicios públicos; cuando el consejo industrial no logra llegar a un acuerdo que rija las condiciones de empleo; cuando no hay acuerdo entre las partes para aceptar la mediación voluntaria; o cuando la mediación voluntaria no ha logrado resolver el conflicto. El laudo del arbitraje voluntario u obligatorio tiene fuerza coercitiva para las partes en la disputa.

315. La ley prohíbe las huelgas y los despidos en masa en los casos de conflicto en industrias que proporcionan servicios esenciales, por ejemplo luz, agua, electricidad o limpieza; y el laudo del arbitraje obligatorio es definitivo. Las huelgas y los despidos en masa se permiten sólo después de que se han agotado todos los procedimientos de conciliación; en ese caso, los empleadores o empleados deben notificar al Ministro, dentro de un período determinado, de su intención de no considerarse obligados por un laudo.

b) *Sindicatos, organizaciones de empleadores, consejos y juntas industriales*

316. No se dispone de datos sobre el número de sindicatos africanos ni sobre la cifra de sus afiliados, con anterioridad a

la aprobación de la *Industrial Conciliation Act* de 1959. El único sindicato africano que se reconoció por ley fue la Rhodesia Railways African Employees Association. Otras organizaciones de trabajadores africanos obtuvieron el reconocimiento de hecho para negociar con los empleadores, pero esas organizaciones no tenían derechos legalmente reconocidos para entablar negociaciones colectivas. En 1951 había veintidós sindicatos no africanos con aproximadamente 14.000 afiliados, registrados con arreglo a la *Industrial Conciliation Act* de 1945. Esos sindicatos no africanos representaban a trabajadores calificados o artesanos. Entre ellos figuraban los de la construcción, la industria mecánica, la de automotores, imprenta, mineros, ferroviarios, trabajadores de la industria de la carne, barberos, dependientes de tiendas, empleados de banco, periodistas y trabajadores municipales. Durante el período de expansión económica, es decir de 1951 a 1956, el número de afiliados de los sindicatos no africanos no aumentó mucho. Según se informó, hacia 1958 el total de afiliados de los 27 sindicatos no africanos registrados era de 15.592.

317. Uno de los resultados inmediatos de la *Industrial Conciliation Act* de 1959 fue el aumento del número de miembros de los sindicatos registrados. A finales de 1960 había llegado a 25.251 afiliados, lo cual representa un aumento de unos 8.000 con respecto al año anterior. La mayoría de los nuevos sindicatos registrados con arreglo a esa ley eran fundamentalmente africanos. Según el informe del Secretario del Registro Industrial correspondiente al año finalizado en 1963, éstos son sindicatos de trabajadores semicalificados y no calificados, entre los cuales los africanos constituyen la inmensa mayoría. Algunos de los sindicatos europeos más antiguos, por ejemplo, los correspondientes al ramo de la minería, imprenta, explosivos y metalurgia, se han organizado sobre una base no racial. Una organización, la Southern Rhodesia Catering and Hotel Workers' Union, creada por trabajadores africanos, admitió a unos 40 europeos inmediatamente después de su registro en 1962. No obstante, parece que la mayoría de los sindicatos han seguido siendo fundamental o exclusivamente organizaciones para trabajadores de una sola raza.

318. En 1961, entre las organizaciones registradas con arreglo a la *Industrial Conciliation Act* de 1959 figuraban 31 sindicatos, 24 organizaciones de empleadores y 18 consejos industriales. En ese mismo año se establecieron 54 juntas industriales para determinar las condiciones de trabajo mínimas de los trabajadores de diversas industrias no organizados en sindicatos.

319. Durante los años 1962 y 1963 aumentó el número de empleadores y empleados que se acogieron al régimen de la *Industrial Conciliation Act*. El número de sindicatos creció de 45 en 1962 a 58 en 1963. El de afiliados a los sindicatos no sólo aumentó con la creación de nuevos sindicatos, sino también debido a que los sindicatos más antiguos adquirieron más afiliados ampliando su campo de acción o representando a otras varias clases de empleados. En 1962, por ejemplo, unos 45.000 trabajadores africanos semicalificados y no calificados de la industria minera fueron puestos bajo la jurisdicción del consejo industrial de dicha industria al ampliarse el registro de la Associated Mine Workers of Rhodesia. De igual modo, los consejos industriales de la industria de automotores de Metabeland y Mashonaland extendieron su jurisdicción con objeto de incluir a las zonas de Midlands y Manicaland.

320. El número de organizaciones de empleadores pasó de 28 a 30 entre los años 1962 y 1963, y el número de consejos industriales de 22 a 26. No se sabe por qué los trabajadores comprendidos por los acuerdos de los consejos industriales no aumentaron en la misma proporción. Según las cifras dadas a conocer por el Departamento de Trabajo y Asistencia Social, en 1962 se hallaban bajo la jurisdicción de los consejos industriales 150.000 empleados y 5.500 empleadores. La misma fuente informó que a finales de 1963 los acuerdos industriales beneficiaban a 115.580 trabajadores. El número de trabajadores regidos por las reglamentaciones sobre empleo establecidas por las juntas industriales registró una reducción análoga. Las 54 juntas industriales aprobaron en 1962 reglamentaciones que interesaban a 158.000 empleados. El número de trabajadores cubiertos por esas reglamentaciones se redujo

a 107.307 en 1963, al disminuir el número de juntas de 54 a 53. Se prevé una nueva disminución de las juntas industriales con la creación de otras industrias. En los cuadros siguientes se indica el número de trabajadores comprendidos por acuerdos industriales y reglamentaciones sobre empleo en el año 1963:

Legislación relativa a las condiciones de empleo de los africanos

a) *La Masters and Servants Act*

321. La ley denominada *Masters and Servants Act* (cap. 247) de 1901, modificada, regula el empleo de personas que trabajan en la artesanía, o de los "trabajadores manuales" del servicio doméstico, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio y las manufacturas. Aunque la ley abarca a todas las categorías de operarios, excluye específicamente a los trabajadores calificados. Rige las relaciones entre empleadores y trabajadores en sectores que en general no están abarcados por la *Industrial Conciliation Act*. Respecto de las zonas rurales, establece las condiciones mínimas de empleo de los africanos en las explotaciones y pequeñas empresas europeas. También regula las condiciones de empleo de los africanos en el servicio doméstico, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

322. La parte I de la ley, que se refiere al contrato de servicio, establece normas de trabajo mínimas. Si el contrato es por un año no pueden preverse más de 313 días de trabajo; si es por un período de tiempo diferente puede estipularse un número proporcional de días laborables. En el contrato no pueden preverse más de diez horas de trabajo al día. A falta de estipulación expresa, los salarios son pagaderos al cabo de 30 días de trabajo. Aunque el contrato no ha de ajustarse a una norma especial, todo contrato debe especificar siempre la fecha de entrada en vigor, el período de servicio y el salario. Cuando el trabajador ha de residir en el lugar de trabajo, el empleador ha de darle alojamiento y comida, a menos que se estipule otra cosa. Salvo que las partes contratantes convengan en ello, el trabajador no tiene derecho a que su familia se aloje con él en el lugar de trabajo; pero la presencia de la esposa y la familia del trabajador en el lugar de trabajo no da derecho automáticamente a que el empleador requiera sus servicios. Se imponen sanciones penales al empleador y al trabajador que contravienen las disposiciones de la ley. Por ejemplo, si un empleado se ausenta de su lugar de trabajo sin causa, se embriaga, es negligente, desobediente o comete abusos, puede ser declarado culpable de una infracción y objeto de una multa. Si no paga la multa, puede ordenarse su encarcelamiento. Un empleador está sujeto a multa o encarcelamiento si deja de pagar el salario o se niega a entregar los bienes de un trabajador. El trabajador que haya estado encarcelado o se haya ausentado sin permiso puede ser obligado a permanecer al servicio de su empleador durante un período igual al de su encarcelamiento o ausencia. Ninguna disposición de la ley que sea incompatible con las leyes o reglamentos aplicables a los africanos se podrá considerar que invalida esas leyes o reglamentos.

b) *La African Labour Regulations (Identification) Act*

323. La ley denominada *African Labour Regulations (Identification) Act* (cap. 100) de 1911, modificada, tiene por objeto regir "la contratación y el empleo de africanos en Rhodesia del Sur y controlar su salida para su empleo en el extranjero, impedir la emigración clandestina de africanos de Rhodesia del Sur...". Esa ley establece un sistema para la contratación de mano de obra africana. Además, regula las condiciones de empleo de la mano de obra no calificada para la minería, la agricultura, la ganadería africana, el comercio o la industria manufacturera. El personal de servicio doméstico y los trabajadores calificados quedan excluidos de las disposiciones de la ley.

324. Sólo el que tiene licencia de empleador o el que actúa en su nombre puede contratar mano de obra africana. Los auxiliares de un agente o de un empleador que tengan esa licencia perciben una remuneración que se calcula "proporcionalmente al número de africanos contratados". A los jefes

y notables africanos se les prohíbe actuar, directa o indirectamente, como agentes de contratación.

325. El contrato de empleo se ha de concertar por escrito y ha de estar legalizado; para la contratación de un trabajador africano también se exige un certificado médico. Si el contrato es para trabajar fuera del Territorio, ha de ser registrado. Los gastos que ocasione el traslado de los africanos de su hogar al lugar de trabajo debe sufragarlos el empleador o, en algunos casos, el agente laboral; esos gastos incluyen los de comida, agua potable, combustible, utensilios de cocina, vestido y mantas.

326. La ley especifica que cuando un empleador contrata a 300 trabajadores africanos o más, ha de tener un encargo para que supervise el *compound* u otro alojamiento destinado a los trabajadores. La ley también estipula que el Ministro puede prescribir en qué zonas puede entrar un africano; esas zonas no pueden extenderse a más de 40 kilómetros de la frontera de Rhodesia del Sur. El Ministro nombra inspectores de mano de obra africana para que investiguen y determinen las contravenciones menores a los reglamentos cometidas por africanos. Los inspectores también pueden llevar ante los tribunales a los africanos que violan las disposiciones de la ley.

327. Para lograr los propósitos de la ley, el Gobernador está autorizado a reglamentar la expedición, la forma y la derogación de las licencias, la ejecución, legalización, registro, cumplimiento y cancelación de los contratos, el retorno de los trabajadores africanos que no tienen un contrato de trabajo válido, la contratación de africanos y su traslado a los centros de trabajo o a otros lugares, el control de los trabajadores africanos durante su estancia en los distritos indígenas, el reconocimiento médico y la vacunación de los trabajadores africanos, el alojamiento y alimentación adecuados de los trabajadores, el control de los *compounds*, el alojamiento de los trabajadores africanos casados, y el establecimiento de zonas de contratación y de oficinas centrales a las que se lleva a los africanos para su registro, así como las prácticas aplicables a esas oficinas, antes de asignar al trabajador al posible empleador. La administración de la ley no es uniforme en todo el Territorio, y se especifica que la reglamentación puede diferir según los distritos o las zonas.

c) *La Africans (Registration and Identification) Act*

328. La *Africans (Registration and Identification) Act* (cap. 109) de 1957, modificada, dispone que todos los africanos han de ser registrados y han de recibir un certificado o una cartilla de registro. Ciertas clases de africanos que se consideran "aptos y adecuados" tienen derecho a recibir una tarjeta de identidad. El titular de una tarjeta de identidad está exento de la obligación de tener un certificado o una cartilla de registro. Además, está exento de cumplir cualquier disposición o reglamento promulgado por una autoridad local en el que se requiera que un africano ha de tener un pase. Todo empleador ha de pedir a su empleado africano el certificado o cartilla de registro o la tarjeta de identidad. Esos documentos se endosan para indicar la situación laboral del titular. En el endoso se indica la fecha en que el trabajador empieza a prestar servicio y el sueldo que se le paga. Así, a menos que el documento indique que el trabajador ha cesado en su empleo y está disponible para trabajar, tanto un empleador como un trabajador pueden ser objeto de penas por concertar un contrato de trabajo mientras el trabajador está ligado por contrato a otro empleador. Se imponen sanciones a los africanos, a los empleadores y a toda persona que viole las disposiciones de la ley. Por ejemplo, se imponen multas o penas de prisión a un africano por no tener o no presentar los documentos debidos. Del mismo modo, el empleador que al vencer un contrato se niegue a dar debidamente de baja a su empleado africano que se lo solicite, está sujeto a sanciones penales.

d) *La Africans (Urban Areas) Accommodation and Registration Act*

329. La ley denominada *Africans (Urban Areas) Accommodation and Registration Act* (cap. 110) de 1951, modificada,

se promulgó "para que los empleadores den alojamiento gratuito a sus trabajadores africanos y a ciertas esposas de los mismos para los fines indicados, así como para que las autoridades locales regulen y controlen la situación de los africanos que buscan empleo o están de visita en las zonas bajo jurisdicción de esas autoridades". La ley rige en seis municipios del Territorio.

330. En virtud de la parte I de la Ley, la zona de una autoridad local puede ser declarada "zona designada" por el Gobernador. En una zona designada, el empleador debe dar alojamiento a su empleado africano. El alojamiento ha de estar en "un local privado autorizado" o en "una zona residencial africana" (poblado africano o cualquier lugar así designado conforme a la *Native Urban Locations Act*). Un local autorizado forma parte de la propiedad ocupada por el empleador y ha de satisfacer las normas que especifica la ley. Un trabajador africano también puede ser alojado en una "aldea africana" (poblado africano establecido conforme a la *Land Apportionment Act*) y, en ese caso, el trabajador paga una parte del alquiler. Cuando el trabajador es alojado en una zona residencial africana, el empleador está obligado a pagar el alquiler a la autoridad local. El alquiler es el mismo para el trabajador casado y el soltero. Si el trabajador percibe un salario mayor que el que prescribe la ley, está obligado a contribuir con una parte del mismo al pago de sus gastos de alojamiento en una zona residencial africana.

331. En virtud de la parte II, la zona de una autoridad local puede ser designada "zona proclamada" si al Gobernador le consta que la autoridad ha creado en ella un "poblado africano" (zona así designada conforme a la *Land Apportionment Act*). En una zona residencial africana, las autoridades locales han de comprar o construir y mantener un alojamiento para los africanos que buscan empleo o están de visita en la zona de la autoridad local.

332. En relación con las zonas proclamadas, las autoridades locales están obligadas por ley a llevar una cuenta llamada African Reserve Account. En esa cuenta han de asentar todos los alquileres y demás fondos derivados de la gestión y administración de las zonas. Con cargo a la cuenta se sufraga el costo de los servicios prestados por las autoridades locales a su zona o a cualquier alojamiento que mantengan en ella, o de otros servicios de asistencia a los habitantes.

333. La mayor parte de la legislación arriba mencionada ha sido objeto de críticas por los departamentos gubernativos que la administran o por las comisiones gubernamentales que analizan los efectos de su aplicación. Por ejemplo, cuando se presentó el proyecto de la ley denominada *Africans (Registration and Identification) Act*, el Ministro indicó que la misma no disponía lo necesario para facilitar el control de los pases urbanos, que la División de Asuntos Nativos había pedido. El informe de la Comisión de asuntos africanos urbanos, de 1958, manifestó que el sistema de registro no funcionaba bien en ninguno de los grandes centros urbanos. La Comisión consideró que la ley no se podía aplicar eficazmente sin añadir gastos de personal y "sin crear efectivamente un mecanismo administrativo y de policía que acabaría con la libertad individual". La Comisión tenía pruebas de que la obligación constante de estar en posesión de documentos de identidad era una causa de frustración e irritación para los africanos respetuosos de la ley. Por otra parte, algunas personas se valían de los documentos para eludir la indagación criminal. La Comisión apoyó la opinión expuesta por la doctora Sheila van der Horst en su artículo sobre la "igualdad de remuneración por trabajo igual", en el que decía: "Estamos creando una red administrativa con el resultado de que, muchos de los que simplemente tratan de ganarse la vida, quebrantan la ley o se convierten en delincuentes." La Comisión constituida para investigar las funciones administrativas y judiciales de los departamentos de asuntos nativos y de tribunales de distrito, y de informar al respecto, manifestó opiniones similares en 1961. Esa Comisión advirtió que ciertos africanos que estaban atrasados en el pago de impuestos a menudo destruían sus certificados de registro o sus tarjetas de identidad, y recibían duplicados donde no constaba que estaban en mora.

334. La *Africans (Urban Areas) Accommodation and Registration Act* también ha sido criticada por ineficaz. El Secretario de Asuntos Nativos y Comisionado Principal de Asuntos Nativos, declaró en su informe de 1958 a la Asamblea Legislativa lo siguiente: "Por buenas que hayan sido las intenciones de la Asamblea Legislativa al aprobar esta Ley, su propósito no se ha realizado; en la mayoría de las poblaciones los nativos piden viviendas. El atraso en el suministro de viviendas varía según los lugares." El Secretario de Gobierno Local y Viviendas, encargado actualmente de administrar la ley, declaró en 1963 en su informe a la Asamblea Legislativa: "Existe en muchos sectores un sentimiento creciente de que, dadas las condiciones actuales, hay que introducir modificaciones profundas en esta ley, si no derogarla para sustituirla por otra nueva. El Ministerio del Trabajo todavía está considerando la cuestión de la consolidación de los subsidios de alquiler con los salarios."

B. Salarios

Generalidades

335. La *Industrial Conciliation Act*, de 1959, no se aplica a los trabajadores agrícolas ni a los del servicio doméstico. Se calculaba que en 1963 había 356.590 empleados en esos sectores. De los restantes 339.410 que, según se calculaba, estaban empleados en otros sectores, el régimen de fijación de salarios establecido por la ley comprendía a 222.187. Es difícil determinar los efectos de la ley en el régimen de salarios del Territorio ya que desde su aprobación han aumentado tanto los salarios de los sectores comprendidos en el campo de aplicación de la ley, como los de los excluidos del mismo. Sin embargo, como se verá más adelante, el ritmo de aumento de los salarios en el sector del servicio doméstico privado y en el sector agrícola (en lo que respecta a los africanos) ha sido más lento que en otros sectores de la economía. Ha habido aumentos importantes de los salarios en ocupaciones y oficios semicalificados y no calificados, que han favorecido principalmente al obrero africano. Hay casos en que el aumento de salarios puede atribuirse directamente a los efectos de la mencionada ley. En 1961, por ejemplo, los sindicatos de la industria de la construcción, a raíz de haber admitido el ingreso de afiliados africanos, negociaron un nuevo contrato que elevó el salario mínimo de los artesanos de zonas africanas de un chelín a 3 chelines por hora. En el cuadro siguiente se enumeran los salarios medios establecidos por ley para la industria en 1963:

SALARIOS INDUSTRIALES DETERMINADOS POR LEY

	Salario mínimo medio mensual establecido por ley*		
	Libras esterlinas	Chelines	Peniques
Productos alimenticios: panadería, frigoríficos, elaboración de alimentos, preparados de carne, molinos, azúcar, dulces y confituras	10	4	4
Bebidas: gaseosas, elaboración de cerveza y destilación	11	11	1
Tabaco (inclusive empaquetamiento y clasificación comercial): cigarrillos y tabaco y tabacos diversos	10	5	10
Textiles	9	19	5
Calzado y prendas de vestir: ropa, cuero y zapatos	11	6	5
Productos de madera y corcho (excepto muebles): aserraderos y fábricas de fósforos....	10	8	6
Muebles y ebanistería	9	15	0
Papel y productos de papel: papel	9	2	0
Cuero, excluido el calzado: maletas y artículos de viajes ...	9	15	0

	Salario mínimo medio mensual establecido por ley ^a		
	Libras esterlinas	Chelines	Peniques
Artículos de caucho: Dunlop Limited	13	0	0
Productos químicos: productos químicos, detergentes, pesticidas	10	12	4
Productos del petróleo y del carbón: gasolina y distribuidores de petróleo	10	12	4
Productos de minerales no metálicos: amiantocemento, cemento y cal, canteras	9	19	4
Industrias de metales básicos: hierro y acero	8	13	4
Manufactura de metales (excluida la maquinaria): motores y máquinas	8	13	4
Maquinaria (excluida la eléctrica): motores y máquinas ..	8	13	4
Maquinaria eléctrica: motores y máquinas	8	13	4
Material de transporte (excluida la manufactura de material rodante): motores y máquinas	8	13	4
Manufacturas diversas: pilas, cepillería, artículos de hormigón, pinturas, plásticos, aparatos de radio y televisión, ladrillos y materiales de arcilla, abonos	9	11	1
Manufacturas de vehículos automotores	14	12	6

^a A los salarios mensuales precedentes, hay que sumar una prima de alojamiento, que llega hasta 30 chelines por mes para los trabajadores que ganan menos de 22 libras mensuales.

336. Si se comparan los salarios de no africanos y africanos se advierte una gran disparidad. Esta se debe, en parte, a que la gran mayoría de los empleados africanos son trabaja-

dores no calificados. Además, hay una oferta grande y relativamente elástica de trabajo en relación a la demanda de mano de obra no calificada. También ha contribuido a esta disparidad el hecho de que los trabajadores africanos no se beneficiaban del régimen general de fijación de salarios hasta que fue promulgada la *Industrial Conciliation Act de 1959*. Además hay otros factores que determinan el nivel más bajo de salarios de los trabajadores africanos. No hay disponibilidad de mano de obra calificada en el Territorio, y para los trabajos calificados y la mayoría de los semicalificados se han importado trabajadores del Reino Unido y de Sudáfrica. El Gobierno y los empleadores privados raramente se han preocupado de capacitar a los africanos para ocupaciones u oficios calificados o semicalificados. Los africanos y los no africanos han trabajado en sectores económicos distintos e incluso cuando desempeñaban tareas iguales o semejantes, se aplicaba un régimen de salarios diferente. El Secretario de Trabajo, Asistencia Social y Vivienda, en su informe de 1961 al Ministro, se refería a la distinción de empleos "blancos" y "negros". El informe citaba la industria de la construcción como una de las que aplicaban diferentes escalas de salarios para un mismo trabajo, basadas exclusivamente en la raza. Se señalaba que los europeos empleados por el Departamento Federal de Obras Públicas trabajaban en determinadas zonas cerca de las ciudades; en cambio, los artesanos africanos, empleados por el Departamento de Ingeniería y Construcción de Rhodesia del Sur, hacían el mismo trabajo en zonas africanas y rurales con escalas de salarios mucho más bajas. En una empresa, a saber los Ferrocarriles de Rhodesia, se había eliminado la distinción entre empleos "negros" y "blancos". A raíz de un acuerdo concertado entre el Consejo Laboral Nacional y los Ferrocarriles de Rhodesia en 1960, toda persona, cualquiera que fuera su raza, tenía acceso a cualquier empleo en los Ferrocarriles. A fines de 1960 se tomaron medidas para poner en práctica ese acuerdo y se organizaron escuelas de capacitación para aspirantes de todas las razas. Según el Secretario de Trabajo, Asistencia Social y Vivienda, este fue "uno de los progresos más notables realizados en las relaciones laborales en Rhodesia del Sur".

337. Aunque se han logrado algunos avances para reducir la disparidad de salarios entre africanos y no africanos, el siguiente cuadro indica que aún queda mucho por hacer. En ese cuadro, la remuneración comprende: i) los jornales y salarios en efectivo, prestaciones, pluses y primas; ii) las contribuciones de los empleadores a las cajas de pensiones y planes de atención médica, y iii) el valor en efectivo de las remuneraciones percibidas en especie, por ejemplo, comida y vivienda.

REMUNERACIÓN MEDIA ANUAL DE LOS TRABAJADORES SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD
(En libras esterlinas)

Año	Agricultura, silvicultura y pesca	Minas y canteras	Manufacturas	Construcción	Servicios de electricidad, agua y saneamiento	Servicios			
						Comercio	Transportes y comunicaciones	Doméstico particular	Otros
Africanos									
1954 ...	48	83	65	65	71	88	94	71	84
1960 ...	59	115	125	106	121	120	166	94	124
1962 ...	61	124	164	122	147	159	209	102	165
1963 ...	67	132	183	149	156	165	259	105	172
1964 ...	67	144	198	162	168	180	292	110	180
Europeos, asiáticos y de color									
1954 ...	833	1.169	973	1.022	1.118	685	1.042		843
1960 ...	1.156	1.526	1.212	1.291	1.294	995	1.249		1.063
1962 ...	1.166	1.597	1.297	1.289	1.391	1.073	1.302		1.097
1963 ...	1.241	1.627	1.357	1.361	1.506	1.064	1.363		1.139
1964 ...	1.283	1.662	1.394	1.380	1.587	1.107	1.414		1.118

338. El nivel de los salarios de los africanos aumentó a un ritmo compuesto del 6,1% anual entre 1954 y 1962. La tasa de aumento de los salarios europeos se calculó en un 3,6% en el mismo período. El grado de aumento de la remuneración de los africanos varió según los diversos sectores de la economía. Mientras los salarios de los sectores de manufacturas y de agua/electricidad aumentaron en más del 100% entre 1954 y 1960, los del sector doméstico privado registraron sólo un alza del 40% en el mismo período. En la agricultura se registró el porcentaje de aumento más bajo y fue el único sector en que la tasa de aumento fue más lenta entre los africanos que entre los no africanos de 1954 a 1962.

339. Las cifras estadísticas sobre el ingreso medio resultan menos significativas en una colectividad en la que prevalecen grandes disparidades entre los niveles de vida de los diferentes grupos de población. En 1961 se calculó que unos 81.500 asalariados europeos percibieron 95.600.000 libras esterlinas, o sea un promedio de 1.173 libras por persona. El mismo año, 4.200 asiáticos y de color (mestizos) percibieron salarios y sueldos por valor de 2.400.000 libras esterlinas en total, es decir, un ingreso anual medio per cápita de 573 libras esterlinas; en cambio, 624.000 africanos percibieron 59 millones de libras esterlinas, o sea, un promedio de 95 libras esterlinas por persona. Los empleados no africanos recibieron 98 millones de libras esterlinas, es decir, el doble de la remuneración total de los trabajadores africanos. Esta disparidad ha de sorprender si se recuerda que hay más de siete empleados africanos por cada uno no africano.

340. El cuadro precedente no abarca la remuneración de los africanos ocupados en la economía rural de subsistencia, ya que éstos aparecen clasificados como trabajadores por cuenta propia. Según cifras basadas en la remuneración en efectivo solamente y que excluyen las prestaciones en especie, los africanos asalariados en la agricultura percibieron en 1961, 55 libras esterlinas como promedio, en tanto que el ingreso anual per cápita de los hogares rurales africanos comprendidos en la economía de subsistencia fue de 18 libras esterlinas por término medio.

ANEXO

COMPAÑÍAS FINANCIERAS

1. Algunas grandes empresas financieras han tenido tan variados negocios en la economía de Rhodesia, e incluso en las economías de África oriental, central y meridional, que se ha considerado conveniente agregar como anexo una sección separada sobre ellas. Debido a su predominante y singular interés en el Territorio, merece atención especial y se examina en primer término la British South Africa Company, conocida actualmente con el nombre de Charter Consolidated Ltd.

LA BRITISH SOUTH AFRICA Co.

2. El 1° de abril de 1965, la British South Africa Co. se fusionó con otros dos grupos importantes, la Central Mining and Investment Corp. y la Consolidated Mines Selection Company para formar la nueva Charter Consolidated Ltd. Su activo asciende a más de 142 millones de libras esterlinas*.

3. La British South Africa Co., o la "Chartered" como se la ha llamado, existió como entidad separada durante setenta y cinco años, y desempeñó un papel único y dominante en el Territorio desde su formación en 1889 hasta 1923. El 29 de octubre de 1889 se concedió a Cecil Rhodes y a otros seis asociados una licencia real^b para "constituir, organizar y registrar un solo órgano político y colectivo con el nombre de The British South Africa Company". La finalidad de la nueva compañía consistía en explotar la riqueza mineral del Territorio situado "al norte de la Bechuanía británica, al norte y oeste de la República de Sudáfrica, y al oeste de los domi-

nios de Portugal", región que cubre aproximadamente 500.000 millas cuadradas, tomando como base la concesión Rudd. Se agregó otro acuerdo para reforzar el control de la compañía en el Territorio; a saber, la concesión que Edouard Lippert habría obtenido de Lobengula, rey de los Matabeles "para dar títulos de propiedad o alquilar tierras" en nombre de Lobengula.

4. En 1890 se llegó a un acuerdo con el Jefe de Barotselandia (ahora parte de Zambia), Lewanika. En virtud de este acuerdo, la compañía adquirió el Derecho a las regalías de la producción del Copperbelt.

5. La compañía se registró con un capital de 1 millón de libras esterlinas, pero hubo que reunir más fondos, y en 1923 el capital suscrito alcanzó los 9 millones de libras. Sin embargo, se pagaron dividendos a los accionistas durante casi veinte años. Los gastos de capital fueron siempre altos. La compañía se encargó de la administración del Territorio; se construyeron ferrocarriles y otros medios de comunicación, y al colonizar nuevas tierras hubo que emprender diversas formas de desarrollo. Por este motivo, las regalías que cobró la compañía sobre los derechos mineros no dieron grandes beneficios, debido ante todo a que la producción aumentó muy lentamente. En 1893 las tribus Matabeles se levantaron contra los colonos y la compañía tuvo que sostener una guerra para dominarlos; ocupando entonces toda la región que ahora constituye Rhodesia del Sur. La lucha no terminó definitivamente hasta fines de 1897.

6. La inauguración en 1897 del primer ferrocarril (de Kimberley en Sudáfrica a Bulawayo) señala un hito importante en las actividades económicas de la compañía; en 1899 se inauguró el ferrocarril de Beira (Mozambique) a Salisbury (vía Umtali). En 1902 Salisbury y Bulawayo se unieron por ferrocarril; en 1904 se terminó la línea a las cataratas de Victoria. Todos esos progresos hicieron lucrativa la minería en gran escala; la maquinaria pudo importarse a más bajo precio, pudieron exportarse minerales y productos agrícolas y empezó a entregarse carbón desde las zonas carboníferas de Wankie a las minas. La compañía estableció también servicios de carácter social.

7. Aprovechando de la amplitud de sus concesiones, la compañía trató de atraer mineros y agricultores al país. Gradualmente adquirió el carácter de una sociedad financiera, con acciones en ferrocarriles y otras empresas, y se convirtió en la principal fuente de crédito para los pequeños empresarios.

8. Cuando la compañía se percató de que en el Territorio no existía el oro en la misma proporción y concentración que en el Transvaal, estimuló las prospecciones en pequeña escala cambiando el sistema de percepciones. Entre los años de guerra de los boers y la primera guerra mundial mejoró la situación financiera de la compañía, debido sobre todo al aumento de la producción del oro, y al comienzo de la extracción de metales básicos. La compañía empezó a fomentar con más energía la colonización y explotación agrícolas; sus ingresos aumentaron con la venta de tierra a los colonos y, al adelantar la colonización, aumentaron también los ingresos aduaneros y las utilidades de los ferrocarriles.

9. En 1922 se celebró en el Territorio un plebiscito sobre su condición legal. En 1923, treinta y cuatro años después de concederse la primera licencia a la compañía, el Territorio fue formalmente anexionado a la Corona británica y se estableció un "gobierno responsable". Al año siguiente el Gobierno británico se hizo cargo de Rhodesia del Norte (Zambia). La British South Africa Company quedó convertida en una empresa puramente comercial.

Negociaciones con el Gobierno del Reino Unido

10. La compañía renunció a todos sus derechos financieros contra el Gobierno del Reino Unido por sus pasados déficit administrativos, a cambio de un pago en efectivo de 3.750.000 libras de los cuales 2 millones debían ser aportados por los colonos. Se garantizaron los derechos mineros y, por lo que se refiere a los ferrocarriles, se le concedieron garantías específicas para proteger sus inversiones. La propiedad de todas

* *The Cape Times*, 27 de enero de 1965.

^b Se firmaron licencias suplementarias el 8 de junio de 1900, el 13 de marzo de 1915, el 25 de marzo de 1924 y el 16 de agosto de 1954.

las tierras no enajenadas pasaron al nuevo Gobierno de Rhodesia del Sur. En Rhodesia del Norte la compañía retuvo extensas zonas en propiedad absoluta, así como todos los derechos mineros. Retuvo también una participación del 50% durante cuarenta años en las utilidades netas de la venta de tierra en Rhodesia noroccidental; esta disposición se conmutó en 1956 por un pago anual de 50.000 libras esterlinas hasta marzo de 1965.

11. Los accionistas de la compañía no habían recibido dividendos durante treinta y cuatro años. Sin embargo, la función de la compañía en la inversión de capital británico en Rhodesia del Sur tuvo una importancia crucial y dominante. En 1924 la compañía pagó un dividendo inicial de 6 peniques por acción a sus accionistas. Su posición financiera mejoró desde entonces rápidamente.

12. De 1923 a 1933 el ingreso anual medio de la compañía por concepto de regalías mineras en Rhodesia del Sur, fue de unas 100.000 libras. Se concedieron permisos a grandes y bien financiadas compañías que estaban obligadas a gastar un mínimo cada año en prospección de minerales. La compañía consiguió con frecuencia participación en dichas empresas, además de conservar el derecho a una parte de los metales producidos. Su participación en los ferrocarriles representó casi el 80% del sistema ferrocarrilero total y la expansión minera contribuyó a un tráfico suplementario y mayores utilidades procedentes de dicha participación.

13. En 1937 un plan de refinanciación liberó a la compañía de su responsabilidad con respecto al capital en obligaciones que había garantizado en los ferrocarriles; mientras existió la garantía la compañía conservó grandes cantidades de acciones del Gobierno; al desaparecer tal garantía, se vendió buena parte de los bonos del Gobierno utilizándose el dinero, entre otras inversiones, para adquirir una participación considerable en la Anglo-American Corporation of South Africa. Este fue el principal acontecimiento que condujo a una estrecha asociación entre la British South African Company y la Anglo-American Group; la reciente fusión de la Chartered con la Consolidated Mines Selection que es la compañía financiera domiciliada en Londres de la Anglo-American Group es una consecuencia de esa asociación previa.

14. En 1933, a raíz de elecciones celebradas en Rhodesia del Sur en las que la cuestión de los derechos mineros constituyó la principal controversia, se concertó un acuerdo entre la compañía y el Gobierno de Rhodesia del Sur, en virtud del cual la primera cedía al Gobierno todos sus derechos mineros del Territorio a cambio del pago de 2 millones de libras.

15. Las participaciones de la Chartered en los ferrocarriles se vendieron en 1947 a los gobiernos interesados por la suma de 3.150.000 libras.

16. Mientras tanto, la Chartered amplió sus actividades en Rhodesia del Norte y aprovechando la creciente demanda mundial de cobre. Nuevas compañías de prospección concertaron acuerdos con ella para explotar el mercado; entre éstas, la primera fue la Rhodesia Concessions Ltd., con intereses conjuntos británicos y estadounidenses, representados respectivamente por Sir Edmund Davis y por Alfred Chester Beatty. Ulteriormente, todo el Copperbelt pasó a ser explotado por dos sociedades gigantescas asociadas: la Rhodesian Anglo-American Corporation con capital de Sudáfrica y del Reino Unido, y la Rhodesia Selection Trust con capital estadounidense.

17. Las sumas que recibía la compañía del cobre de Zambia aumentaron considerablemente al elevarse los precios y aumentar la producción de cobre; llegando a constituir la mayor parte de sus ingresos. En su calidad de gran accionista de la Rhodesian Anglo-American Corporation y de asociada de la Rhodesia Broken Hill, principal productora de zinc, sus ingresos se elevaron aún más.

18. En 1949 la compañía firmó un acuerdo con el Gobierno de Rhodesia del Norte renunciando a sus derechos mineros en 1986, a cambio de la devolución del 20% de los ingresos de regalías al Gobierno y de una garantía eximiéndola de toda

tributación discriminatoria sobre el saldo. La compañía invirtió grandes sumas en varias industrias y compañías filiales tanto en Rhodesia del Sur como del Norte: estas inversiones tenían por fin reemplazar los ingresos perdidos por concepto de derechos mineros y hacer frente al momento en que cesasen completamente. El 24 de octubre de 1964 las regalías mineras se traspasaron al Gobierno de Zambia por una suma de 4 millones de libras, la mitad de la cual a cargo del Gobierno de Zambia y la otra, *ex gratia*, al del Gobierno del Reino Unido.

Propiedades y operaciones de la British South Africa Company

19. El capital autorizado de la B. S. R. fue en un principio de 1 millón de libras en acciones de 1 libra. El 1° de mayo de 1924 se devolvieron 5 chelines por acción a los accionistas, reduciéndose así el valor de la acción a 15 chelines. En 1955 el capital autorizado se aumentó de 6.750.000 libras a 13.500.000 capitalizándose cerca de 6.500.000 libras de reserva, y se emitieron 9 millones de nuevas acciones. En 1959 el capital se aumentó a 14.250.000 libras con 1 millón de acciones nuevas; se concertó además un acuerdo con la Union Corporation Ltd. Group⁴, por el cual se emitieron 455.000 acciones totalmente desembolsadas a una filial de esta última, y 700.000 acciones totalmente desembolsadas de 2 chelines 6 peniques cada una en la Union Corp. a una filial de la British S. A. Co.

20. En 1963, antes de su fusión con los otros dos principales grupos mineros, además de los considerables ingresos obtenidos de las regalías mineras de Zambia, y otras acciones mineras, la British S. A. percibió utilidades de sus propiedades agrícolas de 144.000 acres de superficie en Rhodesia del Sur⁵. Las operaciones agrícolas realizadas por el grupo consistían principalmente en reforestación y tratamiento de la madera, así como en la producción de cítricos para los mercados mundiales. La compañía recibía además pagos anuales por valor de 50.000 libras esterlinas del Gobierno de Rhodesia del Norte en virtud del acuerdo de 1956. El principal centro de cotización de las acciones se mantuvo en el Reino Unido, con otro del Dominio en Salisbury y en Johannesburgo.

Lista de las empresas subsidiarias y de los intereses del Grupo en 1963

21. Empresas subsidiarias registradas en el Reino Unido: The British South Africa Co. Citrus Products Ltd., The British South Africa Co. Holdings Ltd., The British South Africa Co. Investments Ltd., The British South Africa Co. Management Services Ltd., Cecil Holdings Ltd., Cecil Investments Ltd. y The Rhodesia Railway Trust Ltd.

22. Empresas subsidiarias registradas en Rhodesia del Sur: Beit Holdings (Pvt.) Ltd., Charter Properties (Pvt.) Ltd., Indaba Investments (Pvt.) Ltd., Jameson Development Holdings (Pvt.) Ltd., Northern Mining Holdings (Pvt.) Ltd., First Property Co. (Pvt.) Ltd., Varied Investments (Pvt.) Ltd., y Rhodesia and Nyasaland Forest Enterprises (Pvt.) Ltd.

23. Empresas subsidiarias registradas en Zambia: Charter Finance and Investment Co. of Northern Rhodesia Ltd. y Ridgeway Finance Co. Ltd.

24. Otras empresas subsidiarias: Coniarum Holdings Ltd. (Canadá).

25. La British South Africa Company tiene grandes intereses en la Border Forests (Rhodesia) Ltd. y la Rhodesian Iron and Steel Co. Ltd. y la mitad de los intereses en la Rhodesian Milling Co. (Pvt.) Ltd.; además, tiene importantes inversiones en muchas otras compañías industriales y financieras.

26. En 1963 el grupo adquirió una fuerte participación en la Société Internationale Pirelli S. A. de Suiza.

Inversiones

27. En el cuadro siguiente se detallan las distintas clases de inversiones de la cartera del grupo de la British South Africa Company:

⁴ Esta compañía internacional tiene sus mayores inversiones en la República de Sudáfrica.

⁵ Se empleaban en dichas propiedades agrícolas unos 120 "europeos" y 3.000 "africanos".

⁶ En 1958, los ingresos de la compañía procedentes de las regalías sobre derechos mineros ascendieron a 6 millones de libras de un ingreso total de 9 millones.

100 libras esterlinas	30 de septiembre de 1963	
	Valor en el mercado de las inversiones cotizadas	Inversiones no cotizadas: evaluación de los directores
Compañías mineras y de crédito comercial de Rhodesia del Norte....	8.581	2.858
Intereses industriales y de otra índole en Rhodesia	439	6.705
Otras compañías mineras y de crédito comercial en África	24.330	—
Reino Unido, otras inversiones	9.511	4.405
Estados Unidos de América	6.369	—
Canadá	3.012	219
	52.241	14.188
	66.429	

28. Conforme a la reforma de 1962 de la licencia de la compañía, no menos de los dos tercios de los directores (incluso el presidente y el vicepresidente) y el representante principal de la Compañía en África tenían la condición jurídica de súbditos británicos. La junta directiva de la compañía en 1963 estaba compuesta en la forma siguiente: Sr. P. V. Emrys-Evans (R. U.) (Presidente), Sr. L. F. A. d'Erlanger (R. U.), Sr. R. Annan (R. U.), Sr. M. F. Berry (R. U.), Sr. H. Grenfell (R. U.), Vizconde Malvern (R. U.), Sr. H. F. Oppenheimer (Sudáfrica), Sr. W. M. Robson (R. U.), Sir Keith Acutt (R. U.), Sir Frederick Crawford (Rhodesia del Sur), Sr. H. A. Smith (R. U.) y Sr. T. P. Stratten (Sudáfrica).

29. A continuación se reproducen las cuentas consolidadas de la British South Africa Company correspondientes a los años 1961-1963:

PASIVO
(En libras esterlinas)

30 de septiembre	Capital en acciones	Reservas de capital	Reservas de ingresos	Tributación futura	Obligaciones		Accionistas minoritarios
					4-½% 1978-83	4% 1978-83	
1961	13.482.003	5.455.153	28.878.678	32.975	500.000	500.000	83.138
1962	13.482.003	5.721.010	33.265.725	116.169	500.000	500.000	78.715
1963	13.482.003	8.894.399	37.235.896	116.811	500.000	500.000	80.126

PASIVO (continuación)
(En libras esterlinas)

	Partida destinada a pensiones	Dividendos no percibidos	Interés acumulado	Acreedores	Tributación	Dividendos
1961	81.532	144.884	13.016	911.527	4.678.043	4.128.863
1962	79.339	154.060	13.016	1.009.112	4.319.028	4.128.863
1963	(en "Acreedores")	160.698	13.016	1.146.861	4.655.025	4.128.863

ACTIVO
(En libras esterlinas)

	Activo fijo	Inversiones		No cotizadas	Fondo de los dividendos no percibidos	Valores y reservas
		Cotizadas	Valor de mercado			
1961	5.640.732	31.189.348	36.823.300	12.934.273	144.884	386.187
1962	5.925.616	32.331.706	40.802.706	14.848.322	154.060	877.456
1963	6.176.195	39.367.219	52.241.216	14.906.571	160.698	1.108.662

ACTIVO (continuación)
(En libras esterlinas)

	Valores del Gobierno a precios corrientes	Deudores	Sumas pagaderas por concepto de impuestos	Préstamos a corto plazo	Dinero en efectivo	Total del activo
1961	2.619.635	1.720.983	327.696	3.291.443	634.631	58.889.812
1962	2.829.967	1.881.569	222.454	3.328.748	967.142	63.367.040
1963	1.071.377	2.500.524	4.233	4.789.994	828.225	70.913.698

RESULTADOS (*Ingresos*)
(En libras esterlinas)

	<i>Ingresos procedentes de:</i>		<i>Venta de inversiones</i>	<i>Menos: depreciación de las inversiones, etc.</i>
	<i>Intereses de los dividendos</i>	<i>Regalías mineras</i>		
1961	4.090.056	10.303.088	1.811.040	1.733.492
1962	4.703.379	10.906.195	144.330	Cr. 167.043
1963	4.812.436	10.618.635	267.349	Cr. 56.408

RESULTADOS (*continuación*)
(En libras esterlinas)

	<i>Utilidades</i>	<i>Tributación</i>	<i>Utilidades remanentes</i>	<i>Dividendos netos</i>
1961	13.570.871	5.610.459	7.960.412	4.128.863
1962	14.597.207	6.068.468	8.528.739	4.128.863
1963	14.422.634	6.323.600	8.099.034	4.128.863

Fusión de la British South Africa Co. con la Central Mining and Investment Corp. Ltd. y la Consolidated Mines Selection Co. Ltd.

30. En el momento de su fusión con la Consolidated Mines Selection y la Central Mining and Investment (1964), el activo total de la Chartered pasaba de 80 millones de libras. Como ya se dijo, había un vínculo entre la British South Africa Co. y el Grupo Anglo-American⁴, desde 1937. Más tarde varias compañías del grupo Anglo-American adquirieron valores en la British South Africa Co.

31. La Consolidated Mines Selection representaba una parte importante de los intereses no africanos de la Anglo-American, y tenía su sede en Londres. Además, tanto la Chartered como la Consolidated poseían acciones en la Central Mining, que también representaba intereses londinenses.

32. Conforme al nuevo arreglo por el que se estableció la Charter Consolidated, ciertos miembros del Grupo Anglo-American eran los mayores accionistas individuales en la Charter Consolidated (el 30% aproximadamente del capital). Los intereses de la Charter Consolidated se hallan distribuidos así: 39% en la República de Sudáfrica, 16% en el resto de África, 23% en América del Norte y 22% en otros países⁵.

33. El punto de partida para la división del capital de la Charter Consolidated entre los accionistas de las tres compañías consistió en que los tenedores de la Chartered debían recibir una misma suma nominal de capital, pero expresada en función de tres acciones de 5 chelines cada una, en vez de una acción de 15 chelines; este último ha sido el valor nominal desde el reembolso de los 5 chelines del capital original de las acciones de una libra esterlina en 1924. A los accionistas de la Central Mining and Investment Corporation, que seguían en orden de importancia, se les asignaron 23 acciones en la nueva compañía por cada ocho acciones de una libra cada una que estaban en su poder, mientras que a los tenedores de la Consolidated Mines Selection se les asignaron 21 acciones de la Charter Consolidated por cada diez acciones de 10 chelines cada una que estaban en su poder. Estas condiciones fueron aprobadas por los accionistas, y así la Charter Consolidated tuvo un capital inicial emitido de 97.367.579 acciones. Estas condiciones significaban que los tenedores de la Chartered recibían el 55,4% del capital de la Charter Consolidated, y los de la Central Mining el 25,1%, al paso que se asignaba el 19,5% a los tenedores de la Consolidated Mines Selection. El capital

autorizado de la nueva compañía se fijó en 130 millones de acciones emitidas el 1° de abril de 1965.

34. Sobre la base de un cálculo hecho a fines de 1964, teniendo en cuenta el valor de mercado de las acciones cotizadas y el precio convenido a los efectos de la fusión de los valores no cotizados, la nueva compañía tenía un activo neto de 142 millones de libras.

35. Después de la formación de la Charter Consolidated, se llegó a un acuerdo con la Zambia Anglo-American para fusionar sus intereses de Rhodesia en la Amrho Company⁶. Como resultado de la fusión, el activo neto de la AMRHO aumentó en unos 19.600.000 libras. El 47,7% de la compañía es propiedad de la Zambia Anglo-American y el 36,9% de la Charter Consolidated.

36. El capital autorizado de la nueva compañía es de 30 millones de libras dividido en 120 millones de acciones de 5 chelines cada una, de las cuales 93.367.579 acciones se emitieron en la forma siguiente: a los miembros de la Chartered, 53.928.012 acciones; a los miembros de la Central Mining, 24.437.500 acciones y a los miembros de la Consolidated Mines Selection, 19.002.067 acciones. El Presidente de la nueva compañía es el Sr. P. V. Emrys-Evans, Presidente de la British South Africa Co.; los Vicepresidentes los Sres. S. D. H. Pollen y H. V. Smith; el Director Gerente el Sr. W. D. Wilson; y entre los demás directores figuran Sir Keith Acutt, Sr. A. Chester Beatty (también Director de Selection Trust y de la British Overseas Mining Association), Sr. C. W. Engelhard, Sr. H. St. L. Grenfell, Sr. H. F. Oppenheimer, Sr. Evelyn de Rothschild y Sr. T. P. Stratton.

37. En enero de 1965, los consejos de administración de las tres compañías emitieron un comunicado en el que expresaban la esperanza de que la fusión crease un ente de gran potencia con una amplia gama de intereses, capaz de fomentar y emprender actividades comerciales en gran escala.

38. Si bien había muchas analogías en el carácter de las actividades comerciales e inversionistas de las tres compañías, cada una de ellas tenía asociaciones y actividades diversas que aunadas les permitirían desarrollarse en forma más provechosa sobre una base internacional. Se tenía el propósito de que la nueva compañía, bien sola o bien asociada a otras instituciones, gestionase activamente nuevos negocios de minería, comercio e industria en todo el mundo. La iniciación de grandes proyectos nuevos exigía importantes recursos técnicos y financieros y, por ello, la nueva compañía estaría en condiciones de desempeñar una función más importante y obtener mayo-

⁴ Se considera que la Anglo-American representa los intereses financieros más importantes en Sudáfrica.

⁵ Los intereses no africanos están en su mayor parte en poder de la Hudson's Bay Mining and Smelting, la Rio Tinto Zinc, la Rhodesia Railways Trust y la Société Internationale Pirelli S. A.

⁶ La AMRHO (Anglo-American Corp. (Rhodesia) Ltd.), se conocía anteriormente con el nombre de Rhosouth, Ltd.; es una empresa subsidiaria de la Zambia Anglo-American Ltd. y que ésta posee enteramente.

res beneficios que los que obtenían las tres compañías individualmente. Además, la unificación de las actividades comerciales y la administración de las tres compañías permitiría, con el paso del tiempo, obtener grandes economías.

39. En abril de 1965, se anunció que el capital emitido de las empresas subsidiarias del grupo British South Africa Co. titular de intereses de la Southern Rhodesian sería adquirido en 6.200.000 libras por la Anglo-American Corp. (Rhodesia) Ltd. (AMRHO). Las compañías del grupo Charter Consolidated utilizarían el precio de compra para suscribir acciones de la AMRHO.

ANGLO-AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA (LTD.)

40. En su discurso ante la 47a. asamblea general anual, el Presidente de la Anglo-American Corporation of South Africa (Ltd.), Sr. Harry F. Oppenheimer, dijo entre otras cosas que la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia hizo necesaria una reorganización de los intereses que la compañía tenía en Rhodesia¹. Como consecuencia del cambio de Salisbury a Lusaka de las oficinas centrales de las compañías mineras de Rhodesia del Norte pertenecientes al grupo, así como de la Rhodesian Anglo-American Ltd., el Sr. P. H. A. Brownrigg se ha trasladado a Lusaka haciéndose cargo de la oficina. En Rhodesia del Norte se ha registrado una nueva compañía subsidiaria: la Anglo-American Corporation (Central Africa) Ltd. con sus oficinas centrales en Lusaka y ha asumido las funciones técnicas y administrativas hasta entonces ejercidas por la propia sociedad con respecto a las compañías de Rhodesia del Norte pertenecientes al grupo.

41. El Presidente, tras hablar de la "gran intranquilidad reinante en el Copperbelt" durante el período examinado, del importante aumento experimentado en la Bolsa de Metales de Londres por el precio al contado del cobre en lingote y alambre y de otros detalles relativos a las minas de cobre de Rhodesia del Norte, continuó diciendo que al frente de la oficina de Salisbury estaba el Sr. H. H. Taylor, que había sido nombrado agente principal en Rhodesia del Sur. La situación política en ese Territorio había causado incertidumbre y cierta ansiedad. Pese a ello, muchos sectores de la economía han seguido logrando magníficos progresos. A este respecto se refirió a la cosecha de tabaco de 1963-64 así como a las industrias azucarera y de productos cárnicos y se habló detalladamente de las Hippo Valley Sugar Estates y de la Wankie Colliery Co. Ltd., en las que la compañía Amrho Ltd., subsidiaria de la Anglo-American, tiene una participación del 23%. Subrayó la contribución de la Compañía a la exploración y búsqueda de minerales de oro, cobre y cromo.

42. El Sr. Oppenheimer, en su discurso preparado para la 48a. asamblea general anual de la compañía, declaró que en 1964 se había producido una acentuada recuperación económica en Rhodesia y se "había producido un gran desarrollo económico"². En abril de 1965, a raíz de la constitución de la Charter Consolidated Ltd., se dispuso la integración del activo de la British South Africa Company en Rhodesia con los intereses rhodesianos de la Zambia Anglo-American y otras compañías del grupo. La compañía resultante de la fusión, la Anglo-American Corporation Rhodesia Ltd., posee ahora la mayor parte de las inversiones de la Anglo-American en Rhodesia y está en buena situación para desempeñar un papel importante dentro del desarrollo de Rhodesia en los sectores de la minería, madera, productos cítricos y mercado financiero.

43. "Aunque la posición económica de Rhodesia ha mejorado notablemente", dijo el Sr. Oppenheimer, "no puede considerarse satisfactoria porque no se está produciendo la corriente de capital procedente del exterior, que es tan necesaria para un país que se encuentre en la etapa de desarrollo de Rhodesia, y, como resultado de ello, las inversiones se quedan atrás. Esto

puede atribuirse en muy gran medida a la incertidumbre política... Se requieren tiempo, paciencia y desarrollo económico y mientras tanto nada ganaría ninguna de las partes precipitando una crisis".

44. Respecto de la Charter Consolidated afirmó que, a diferencia de la Anglo-American Corporation, la cual era una compañía sudafricana y tenía y se propone seguir teniendo en Sudáfrica la mayor parte de sus operaciones, la Charter invertirá fundamentalmente fuera de Sudáfrica y en cierto grado fuera del continente africano.

45. La Rhodesian Anglo-American Limited es una compañía subsidiaria en propiedad absoluta y registrada en Salisbury³. Se constituyó el 1° de enero de 1964 para la administración de intereses en ese país. Al mismo tiempo fue registrada en Lusaka.

LONRHO LTD.

46. La Lonrho Limited, registrada en 1909, era anteriormente conocida como London and Rhodesia Mining and Land Co. Ltd.¹. Modificó su razón social en 1963. A final de 1964, ya había emitido casi 5.750.000 acciones, de las cuales un 54% estaban en manos de los cinco grupos siguientes: The British South Africa Co. (ahora Charter Consolidated); el Drayton Group; el Anglo-American Group; las compañías subsidiarias de la Lonrho y el Standard Bank Nominees. La identidad de este último grupo tenedor es desconocida aunque de gran interés dada la capacidad de la Lonrho para conseguir grandes cantidades de dinero para muchas de sus compras.

47. La Compañía tiene muchos negocios en Sudáfrica, Malawi, Rhodesia, Tanzania, Mozambique y Zambia. Realiza sus operaciones con constante publicidad, lo cual no es táctica seguida por la mayoría de sus competidores y también se ha dedicado a comprar en zonas de "riesgo político" en las que pueden encontrarse buenos negocios.

48. La compañía, que antes obtenía todos sus beneficios de las minas de oro en Rhodesia, ahora opera en muchos sectores: las plantaciones son la fuente mayor de beneficios; otras son el comercio de vehículos de motor, cría de ganado, minas, fábricas de cerveza "chibuku", prensa, hoteles, fábricas de clavos y de hielo seco y ferrocarriles (Malawi). Las tierras de la compañía en Rhodesia del Sur tienen más de un millón de acres.

49. En 1961, los intereses mineros directos de la compañía en Rhodesia del Sur comprendían 164 pertenencias mineras de oro, algunas pertenencias de metales no nobles, propiedades de terrenos con 873.362 acres y 18 locales comerciales en ciudades. Algunas de las propiedades mineras, como por ejemplo la Muriel Mine, estaban arrendadas a otras compañías mediante una regalía proporcional.

50. El Presidente de la Lonrho Ltd. es el Sr. A. H. Ball (Reino Unido). Entre los miembros del Consejo de Administración figuran: Sr. R. W. Rowland (Rhodesia del Sur), Sr. J. Whitehouse (Reino Unido), Sr. J. N. Kick (Reino Unido), Sr. J. A. Caldecott (Reino Unido), Sr. F. E. O. Davies (Rhodesia del Sur), Sr. A. J. B. Ogilvy (Reino Unido), y Sr. C. D. Mackenzie (Reino Unido). Las oficinas centrales de la compañía radican en Londres.

51. El capital registrado de la compañía ascendía a 2 millones de libras correspondientes a 8 millones de acciones de 5 chelines cada una; el capital emitido era de 1.430.069 libras, ampliado en 1963 en 220.278 acciones con el fin de adquirir la Hall Holdings Ltd. La compañía tiene una gran cartera de acciones en la Henderson's Transvaal Estates Ltd. of South Africa.

52. El activo fijo de la Lonrho Ltd. es el siguiente:

¹ The Times (Londres), 4 de junio de 1964, pág. 3; The New York Times, 19 de junio de 1964.

² The Times (Londres), 1° de junio de 1965; African World, julio de 1965.

³ The Economist, 21 de noviembre de 1964; East Africa and Rhodesia, 26 de noviembre de 1964; Southern Africa, 27 de noviembre de 1964; y African World, enero de 1965.

¹ Africa 1965, 16 de julio de 1965.

	(En miles de libras esterlinas)
Granjas, haciendas y plantaciones.....	1.545
Locales y edificios en ciudades.....	1.104
Posesiones mineras	1.029
Instalaciones industriales, vehículos y aviones	1.183
Oleoductos	2.268
Otros proyectos de desarrollo	13
TOTAL	7.142

53. En cuanto al oleoducto, se han firmado los siguientes contratos entre octubre y diciembre de 1962^m:

a) Contrato entre el Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia y la compañía, en virtud de la cual ésta se comprometía a realizar los trabajos de construcción, mantenimiento y explotación de un oleoducto para crudo desde Beira hasta una refinería de petróleo, que, con arreglo a un contrato firmado entre el Gobierno Federal y un consorcio de compañías petroleras, se construiría en las proximidades de Umtali;

b) Contrato entre el Gobierno de Rhodesia del Sur y la compañía, por el cual a la compañía se le otorgaba una concesión para construir y explotar un oleoducto desde la frontera entre Mozambique y Rhodesia del Sur hasta la refinería de petróleo, situada en Feruka, al oeste de Umtali;

c) Contrato entre la Provincia de Mozambique y la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia S. A. R. L., por el que se le otorgaba a la compañía una concesión para construir y explotar un oleoducto desde Beira hasta la frontera entre Mozambique y Rhodesia del Sur; y

d) Contrato entre la compañía y un consorcio de siete compañías petroleras, en virtud del cual aquélla se comprometía a transportar por el oleoducto, a una tarifa inicial de £3,5.5d por tonelada corta, el petróleo que necesite la refinería del consorcio situada en Feruka.

54. Para obtener la concesión de Mozambique a que se hace alusión más arriba era necesario constituir oficialmente una compañía portuguesa; se la denominó Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia, y había de ser una compañía subsidiaria indirecta.

^m R. Beerman, *Financial Year Book of Southern Africa* 1964, vol. I, págs. 46 y 47.

55. En marzo de 1963 se adjudicó el contrato para la construcción del oleoducto de crudo desde Beira a la refinería de petróleo. El costo total hasta el comienzo de las operaciones de bombeo se estimó en una cantidad máxima de 3.500.000 libras, cuya porción principal la financió el contratista, el cual se reembolsará con los seis primeros años de explotación. Las ulteriores obligaciones monetarias con cargo a los recursos propios de la compañía no excederían, según lo previsto, las 600.000 libras esterlinas.

56. En 1964, el comercio de vehículos representó el 12% de los beneficios del Grupoⁿ. Con sus considerables operaciones de venta de piezas de repuestos para muchas marcas y modelos de vehículos a través de la Consolidated Holdings Group, la Lonrho contaba con una especie de amortiguador para cuando se produjera un descenso en las ventas de vehículos nuevos.

57. A partir de junio de 1958, el balance consolidado pasó, después de deducidos los intereses minoritarios, de 1.650.236 libras a 3.657.007; los ingresos, sin descontar la depreciación, los impuestos y los intereses minoritarios, aumentaron de 128.000 libras a 1.308.011 libras. El grupo Lonrho tiene intereses minoritarios importantes, pero sus beneficios sobre el capital de la compañía matriz se elevaron del 7½ a 29¼% y el dividiendo pasó del 5% al 18½%.

58. A continuación figura un resumen del balance consolidado de la compañía al 30 de septiembre de 1964:

	(En miles de libras)
Activo fijo	7.142
Inversiones (valor en libras)	1.984
	9.126
Activos netos corrientes	1.167
	10.293
Menos:	
Obligaciones a largo plazo	1.943
Intereses minoritarios ...	4.693
	6.636
	3.657

59. Se reproduce a continuación un resumen de los resultados financieros correspondiente a los años 1962-1964:

ⁿ *East Africa and Rhodesia*, 8 de abril de 1965, pág. 515.

Ejercicio en 30 septiembre	Dividendos e intereses	Beneficios de las minas	Beneficios de haciendas	Ingresos patri- moniales	Ingresos totales	Gastos administrativos	Impuestos	Beneficios netos menos intereses minoritarios	Dividendos
1962	98.586	53.151	267.978	36.563	630.561	82.855	231.844	192.705	126.328
1963	102.648	77.719	165.968	35.834	722.327	112.165	252.111	239.130	160.584
1964	102.668	439.020	119.110	40.802	1.592.428	281.764	460.669	255.699	160.585

60. En los últimos años, el grupo Lonrho ha incrementado el número de sectores económicos en que opera y ha extendido sus actividades a territorios situados fuera de Africa central y meridional. Asimismo, se ha organizado en una unidad más compacta. La Lonrho Ltd. tiene una cartera mayoritaria muy grande de valores en la Willoughby's Consolidated Co. Ltd., que se dedica a negocios de haciendas. También posee más del 50% del capital de la Henderson's Transvaal Estates Ltd., la cual a su vez posee una mayoría del capital de la Tweefontein United Collieries Ltd., y ésta a su vez es dueña del 62% del capital de la Coronation Syndicate Ltd. Otro miembro principal del grupo es la British Central Africa Co. Ltd., que opera en Malawi y tiene el control de la Central Line Sisal Estates Ltd., la East African Sisal Plantation Ltd., la Tanga Line Sisal Ltd. y la Nyasa Sisal Estates Ltd. También controla la Federal Ventures Ltd., que tiene intereses mineros en Tanzania.

61. Las compañías subsidiarias de la Lonrho dedicadas a minería del oro se describen sucintamente en el capítulo dedicado a minería.

SELECTION TRUST LIMITED

62. El Presidente, Sr. A. Chester Beatty, anunció que los ingresos brutos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 1965 sobrepasaron los 5 millones de libras esterlinas por primera vez, cifra superior casi en 1 millón de libras a la del año anterior^o. Una vez descontados los gastos, los impuestos e intereses minoritarios, el beneficio neto ascendió a 2.490.739 libras esterlinas frente a 1.988.355 en el año anterior. La cartera de acciones más importantes por separado es la que se halla en manos de la American

^o *The Times* (Londres), 12 de junio de 1965.

Metal Climax (AMAX), que proviene de principios del decenio de 1930. Otras participaciones pertenecen a la Bikita Minerals, Consolidated African Selection Trust, Palabora Mining Company, Roan Selection Trust, Sierra Leone Selection Trust, Tsumeb Corporation, Vaal Reefs Exploration and Mining Company, Western Decalta y Western Holdings.

63. Los intereses de la Selection Trust Ltd. en Africa central y meridional se extienden a una amplia gama de operaciones mineras, que comprenden oro y cobre en la República de Sudáfrica, cobre, plomo y zinc en Africa Sudoccidental, litio en Rhodesia y cobre en Zambia. Dichos intereses han sido valorados conjuntamente en 18.300.000 libras, lo que equivale a 22 chelines por acción de la Selection Trust y reportaron unos dividendos de 1.700.000 libras esterlinas o sea 2/1 por acción.

64. A continuación se hace un análisis geográfico del activo y de los ingresos:

	Activo (porcentaje)	Ingresos (porcentaje)
Estados Unidos de América } Canadá	50	23
Reino Unido	6	6
Sierra Leona } Ghana	9	30
Zambia	3	4
Africa Sudoccidental	12	17
Sudáfrica	18	17
Rhodesia	2	3

65. La subsidiaria de la Selection Trust Ltd., la Roan Selection Trust Ltd., que había modificado su razón social anterior de Rhodesian Selection Trust Ltd. tuvo unos beneficios, después de deducidos los impuestos, de 5.899.000 libras en 30 de junio de 1964, en comparación con 5.929.000 libras en el año anterior. Los beneficios antes de descontar impuestos aumentaron, en cambio, en más de 4 millones de libras esterlinas, o sea de 13.290.000 libras a 17.422.000. Su presidente era Sir Ronald Prain.

66. La Roan Selection Trust Ltd.^a tiene un capital autorizado de 22 millones de libras con 22 millones de acciones de 1 libra cada una. De ellas ha emitido 21.572.004 libras, inclusive 1.130.978 acciones como emisión de capitalización, en la proporción de una acción por cada acción de 5 chelines de accionistas registrados el 29 de enero de 1962 y 8.088.720 acciones de 1 libra cada una emitidas a favor de la Roan Antelope Copper Mines Ltd., para la adquisición de la empresa, patrimonio y activo de esta compañía. En el ejercicio que terminó el 30 de junio de 1962, las acciones de 5 chelines se consolidaron en acciones de 1 libra. El capital emitido se amplió en 1 millón de acciones a favor de la American Metal Climax Inc. y con la emisión de 37.409 acciones a favor de determinados directivos y empleados importantes. Después del 30 de junio de 1964 se otorgó a la compañía la inscripción adicional en bolsa de 719 acciones ordinarias de 1 libra cada una.

67. La compañía declaró^a beneficios deducidos los impuestos, para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1965 por valor de 8.683.507 libras esterlinas (5.899.088 libras) de cuya cantidad 1.300.000 (764.659 libras) quedó en manos de las compañías subsidiarias. Los dividendos totales de 6 chelines 3 peniques neto por acción (frente a 4 chelines 4,6 peniques) representarían 6.700.000 libras. Después del traspaso a la reserva general, el paso a cuenta nueva sería de 24.788 libras.

68. La Roan Selection es una compañía financiera de cartera con participaciones en minas y fábricas de cobre y prospecciones y servicios conexos.

Apéndice II

[A/AC.109/L.332/Add.1]

Acontecimientos recientes en relación con las sanciones económicas contra Rhodesia del Sur

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
A. Generalidades	1-7
B. Agricultura	8-17
C. La industria minera	18-24
D. Comercio e industria	25-33
E. Hacienda y comercio	34-79
F. El embargo del petróleo	80-92

A. GENERALIDADES

1. En la 25a. sesión, celebrada el 12 de mayo de 1966, el Presidente del Subcomité I, a propuesta del representante de la Unión Soviética, pidió a la Secretaría que preparase un documento de trabajo complementario en el que se indicara cómo las actividades de los monopolios extranjeros hacían ineficaces las sanciones económicas contra el régimen de Smith. El presente documento de trabajo se ha preparado atendiendo a esa solicitud y debe considerarse como un suplemento al documento presentado al Subcomité el 21 de diciembre de 1965.

2. La información sobre las sanciones económicas y financieras y el embargo del petróleo contra Rhodesia del Sur figura en el anterior documento de trabajo que la Secretaría preparó para el Comité Especial (véase cap. III, parte I). La información complementaria sobre los acontecimientos recientes se indica a continuación.

Otras respuestas a las notas verbales del Secretario General relativas a la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General y la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad

3. Se recordará que al 30 de abril de 1966 se habían recibido respuestas de 66 Estados a las notas verbales del Secretario General en las que éste transmitía a los Estados el texto de la resolución 2022 (XX) de la Asamblea General y de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad (véase cap. III, párr. 14). Posteriormente se han recibido y se han distribuido otras cuatro respuestas:

	Asamblea General Signatura del documento	Consejo de Seguridad Signatura del documento
Argelia	A/6329	
Kenia	A/6333 y Add.1	S/7308 y S/7345 ^a
Perú	A/6355	S/7408 ^b
México		S/7415 ^b

4. También se han recibido respuestas complementarias de los siguientes Estados:

	Asamblea General Signatura del documento	Consejo de Seguridad Signatura del documento
Chile	A/6297/Add.1	S/7323 ^a
Japón	A/6248/Add.1	S/7362 ^a
República Federal de Alemania ..		S/7181/Add.1 ^a

5. Las respuestas complementarias de los Gobiernos de la República Federal de Alemania y del Japón se refieren a las sanciones adicionales que han impuesto a Rhodesia del Sur.

^a Beerman, *op. cit.*, 1965, págs. 71 y sigs.

^a *East Africa and Rhodesia*, 14 de octubre de 1965, pág. 108.

^a *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966.*

^b *Ibid.*, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966.

Reservas formuladas por Portugal y la República de Sudáfrica sobre la resolución 221 (1966)

6. Por carta de 27 de abril de 1966^a dirigida al Secretario General el Gobierno de Portugal expresaba ciertas reservas sobre la resolución 221 (1966) aprobada por el Consejo de Seguridad el 9 de abril de 1966, relativa a Rhodesia del Sur. El Gobierno de la República de Sudáfrica también manifestó reservas en una nota verbal de 22 de junio de 1966^a dirigida al Secretario General.

7. Por carta de 21 de junio de 1966^a el Secretario General comunicó al Gobierno de Portugal que en las conclusiones de un estudio minucioso preparado para su propia información no había nada que justificara las reservas formuladas por dicho Gobierno.

B. AGRICULTURA

8. El Presidente del National Farmers' Union Congress de Rhodesia, Sr. T. Michell, advirtió en junio pasado que la agricultura del país nunca se había encontrado en peores condiciones, con excepción quizás de la época de depresión en el decenio de 1930 y durante la guerra. Agregó que ello no se debía a las sanciones ni a la reciente sequía. El problema más importante era el planteado por la próxima época de siembra del tabaco. En agosto los agricultores debían recibir instrucciones oficiales sobre el volumen de sus cultivos y el "gobierno de Ian Smith" tenía muy poco tiempo para hacerlo.

9. En una declaración hecha también en junio, la Cámara de Comercio de Salisbury advirtió que el crédito agrícola constituiría un problema grave. En la declaración se señalaba que los agricultores venían tradicionalmente contando con el comercio para obtener gran parte de los créditos necesarios de un año para otro. Además, dicha Cámara apoyó sin reservas una advertencia dirigida previamente por la entidad llamada Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia a los granjeros donde se indicaba que, de no surgir alguna novedad en la situación, el comercio no podría proporcionar un volumen muy elevado de créditos durante este año.

La cosecha de tabaco de Rhodesia del Sur

10. Como se señala en el capítulo III, parte I, la cosecha de tabaco para 1966 se calculaba en 200 millones a 240 millones de libras. La venta de tabaco este año ha estado a cargo de la State Tobacco Corporation.

11. Cuando se inició la venta de tabaco en Salisbury, el 29 de marzo de 1966, el sistema de subasta fue sustituido por el de negociaciones privadas. Según se indicó este procedimiento tenía por objeto ocultar la identidad de los compradores extranjeros (cap. III, párrs. 637 a 650).

12. Las ventas secretas de tabaco en Salisbury estuvieron rodeadas de medidas estrictas de seguridad. Según se indicó el Gobierno de Rhodesia se había comprometido a comprar a un precio mínimo determinado los fardos que quedaran sin vender.

13. Según informaciones de prensa, el 20% aproximadamente del tráfico habitual de tabaco se hizo por el puerto de Beira, en el África oriental, en abril y mayo.

14. Según cifras procedentes de Mozambique algo menos de 11.000 toneladas de tabaco salieron de Beira en abril y mayo, primeros meses en que se efectúan las ventas de tabaco de la temporada ordinaria, en comparación con 54.000 toneladas despachadas en los mismos meses del año último. Beira también despacha tabaco de Malawi y Zambia, además del de Rhodesia, pero la disminución registrada entre los dos años se atribuye a una baja de las exportaciones de Rhodesia del Sur.

^a *Ibid.*, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7271.

^a *Ibid.*, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7392.

^a *Ibid.*, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7373.

Por consiguiente ha habido una importante disminución de la exportación de tabaco a través de Beira, pero no una interrupción completa.

15. Beira es el puerto tradicional para la salida de tabaco. No se disponen de cifras del tráfico de tabaco a través del otro puerto mozambiqueño, Lourenço Marques, o a través de los puertos sudafricanos, aunque se ha informado que cierta cantidad de tabaco se vende a Sudáfrica.

La cosecha de azúcar de Rhodesia del Sur

16. Antes de la declaración ilegal de la independencia la cosecha de azúcar de 1965 se había calculado en 250.000 toneladas. Se esperaba que en 1966 se llegaría a las 350.000 toneladas. Los principales compradores de azúcar de Rhodesia del Sur, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, ya han impuesto un embargo a la importación de ese azúcar.

17. Un portavoz de la Asociación Azucarera de Sudáfrica declaró recientemente que este país no compraba azúcar de Rhodesia y tenía el propósito de no comprarlo. El portavoz reiteró que, en opinión de su Asociación, Sudáfrica no podía correr en el plano internacional el riesgo que suponía la adquisición de azúcar de Rhodesia del Sur, dado sobre todo que ello podría poner en peligro la cuota que le habían fijado los Estados Unidos, los cuales habían impuesto un boicot al azúcar de Rhodesia del Sur.

C. LA INDUSTRIA MINERA

18. Según la publicación *East Africa and Rhodesia*, Rhodesia del Sur vendió 288.168 toneladas de carbón y 19.025 toneladas de coque en abril. Las cifras para marzo eran respectivamente de 328.982 y 20.681. El principal importador es Zambia. Sin embargo el Gobierno de Zambia anunció su propósito de interrumpir todas las relaciones comerciales con Rhodesia del Sur, incluido el carbón, una vez que dispusiera de otras fuentes de aprovisionamiento.

19. Según se informó, se esperaba aumentar los ingresos en divisas en 2.200.000 libras anuales, una vez que la mina de níquel Trojan, en Bindura, alcanzara su máxima producción. Asimismo se informó que la Anglo-American Corporation había adquirido el 85% de los derechos de propiedad sobre la mina y que se proponía invertir 4 millones de libras, incluyendo el precio de compra, para ampliar la extracción de mineral hasta 600.000 toneladas anuales. El plan de desarrollar la mina Trojan tiene como motivo un aumento de la demanda mundial de níquel. El año pasado la producción llegó a 365.000 toneladas, lo cual supone un aumento de 30.000 toneladas, y se espera que la producción continuará aumentando sin cesar al ritmo de 7,5% anual hasta 1975.

20. Como se señala en el capítulo III, párr. 669, la Anglo-American Corporation ha abierto tres nuevos pozos en sus minas de la zona aurífera de Felixburg, cerca de Umvuma. Otro pozo, en la mina Tchargwa, que se había abandonado hace algunos años por dificultades debidas al agua, estaba en proceso de profundización y acondicionamiento. Se cree que Rhodesia del Sur no tendrá dificultad en dar salida a su producción de oro, cuyo valor en 1964 ascendió a 7.200.000 libras.

21. Southern Africa de 23 de mayo de 1966 informó que la Anglo-American Corporation abriría una galería de exploración para investigar la posibilidad de establecer una mina de oro en el coto minero Champion situada en la zona de Odzi, cerca de Umtali en Rhodesia. Anteriormente se había llevado a cabo un amplio programa de exploración geológica, en la que se perforaron 17.000 pies de muestra en 26 sondeos para reconocer el Champio Reef y sus estribaciones. En ese coto minero se extraía anteriormente arsénico y en los primeros tiempos de Rhodesia, oro. Las perforaciones efectuadas en los seis últimos años demostraron la existencia de mineral de oro y plata en cantidades suficientes y a una profundidad que justificaba la apertura de una galería de exploración.

22. Asimismo se informó que según las estadísticas reunidas por las autoridades del puerto de Beira, las exportaciones de minerales de Rhodesia del Sur en los cinco primeros meses del año fueron irregulares pero no desalentadoras. La exportación de mineral de cromo por dicho puerto durante ese período ascendió a 94.000 toneladas mientras que en el mismo período del año pasado fue de 100.000 toneladas.

23. La exportación de "minerales varios" ascendió a 183.000 toneladas mientras que en el mismo período del año anterior fue de 202.000 toneladas.

24. *The New York Times* de 2 de julio de 1966 hizo referencia a un informe de un funcionario británico en el que, según dicho periódico, se evaluaba detalladamente la eficacia del embargo comercial y se planteaban cuestiones sobre los envíos de cromo de Rhodesia a los Estados Unidos. Se indicaba que las principales fallas de este embargo eran las ventas de cobre y de asbesto a la República Federal de Alemania, de asbesto al Japón, de carne a Suiza y de azúcar y tabaco a Portugal.

D. COMERCIO E INDUSTRIA

25. Las novedades relativas al comercio y a la industria de Rhodesia figuran en el capítulo III, párrs. 670 a 680.

26. Según la *Standard Bank Review* de mayo de 1966, los datos del sector de las ventas al por menor en general indicaban que la mayoría de las casas comerciales estaban bastante satisfechas con sus negocios durante el mes de marzo, en el que el comercio señalaba una mejora con respecto a los meses de enero y febrero. Los supermercados de autoservicio continuaban atrayendo a mucha clientela si bien se afirmaba que el racionamiento de la gasolina hacía que aumentara el nivel de las transacciones en las zonas suburbanas, donde los clientes compraban "más cerca de casa".

27. Según se informaba la situación en el sector de ventas al por mayor era estacionaria, debido a la disminución del comercio con los países septentrionales vecinos y el efecto de los controles vigentes sobre las importaciones.

28. Sin embargo, durante el período que se examina, se habían concedido cuotas para la importación de muy diversas mercaderías a fin de mantener las existencias a un nivel razonable. La disminución de las existencias de bienes de consumo procedentes de fuentes tradicionales, y en menor grado las simpatías del público, daban lugar a que el mercado de Rhodesia fuera favorable a nuevos tipos de artículos. Debido a su proximidad geográfica, la industria sudafricana estaba en condiciones particularmente favorables para aprovechar la situación.

29. Como se ha dicho, el Sr. Musset declaró (cap. III, párr. 687) que se habían recibido varios informes sobre el comercio de vehículos automotores y que, si bien algunas empresas habían podido mantener su negocio a un nivel adecuado, parecía que en general había disminuido la venta de automóviles nuevos y usados. Las centrales de montaje de vehículos continuaban funcionando a un ritmo limitado.

30. Se indicaba que en la industria el sector de la ingeniería funcionaba bien y el trabajo en perspectiva parecía reflejar en cierto modo la tendencia a fabricar artículos que anteriormente se importaban. Se señalaba que la industria de hilados y tejidos funcionaba a pleno rendimiento en marzo y que se había experimentado una mejoría en el sector de la confección. Los fabricantes de muebles informaban que había aumentado la demanda de sus productos y las perspectivas eran favorables. Los fabricantes de productos alimenticios continuaban activamente sirviendo la demanda local.

31. El *Financial Times* de Londres, del 13 de mayo de 1966, informaba que la industria organizada de Rhodesia estaba realizando un estudio sobre los efectos de las sanciones en la industria manufacturera. Unos 800 miembros de la Asociación de industrias de Rhodesia y Nyasalandia habían llenado cuestionarios pero no se conocían los detalles. De fuentes comerciales de Salisbury se tenían noticias de que había un considerable

nivel de subempleo en la economía, especialmente en el sector de la distribución de vehículos, que había resultado muy afectado, pero que el Gobierno trataba de mantener un estrecho control al respecto recurriendo principalmente al empleo de trabajadores temporeros en los servicios oficiales.

32. Sin embargo, según emisiones de radio recibidas de Salisbury, el 2 de junio de 1966, el Presidente de la entidad llamada Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia, Sr. C. J. Hughes, observaba en el prefacio al informe anual de la Cámara de Comercio que, si bien era notable la habilidad demostrada por los hombres de negocios de Rhodesia en sus esfuerzos por esquivar las sanciones, no sería realista dejar de reconocer que éstas habían surtido efecto. El Sr. Hughes añadía que dentro de la economía el sector de la distribución se hallaba sumamente afectado y que algunas de las organizaciones más débiles y menos eficaces de este sector habían sucumbido.

33. El *Observer* de Londres, de 5 de junio de 1966, indicaba que, según cálculos recientes, en el centro industrial de Bulawayo, 8.000 africanos habían quedado sin trabajo por haber disminuido la demanda local y la de Zambia. En general había disminuido el giro de negocios. Algunos agricultores se encontraban en la imposibilidad de pagar a sus empleados africanos y otros habían tenido que despedir a sus administradores blancos.

E. HACIENDA Y COMERCIO

Nuevos impuestos

34. El Sr. John Wrathall, "Ministro de Hacienda" de Rhodesia del Sur, que ya había indicado al país la posibilidad de un aumento de los impuestos, anunció a principios de junio que presentaría su presupuesto el 21 de julio.

35. Mientras tanto, el régimen ilegal de Rhodesia del Sur aumentó los impuestos sobre las ventas de 4 peniques a 8 peniques por libra el 23 de junio de 1966.

36. Un anuncio oficial extraordinario de 23 de junio de 1966 vino a aumentar también los derechos sobre el whisky, la ginebra, el ron y otros alcoholes y licores en 8 chelines por galón imperial de graduación normal. El mismo día el Sr. Wrathall dijo que las nuevas medidas se presentaban "en este momento" debido a la necesidad de que los cambios fueran efectivos antes que empezara el nuevo ejercicio financiero el 1° de julio de 1966. Anteriormente el mismo Sr. Wrathall había advertido que eran de esperar algunos cambios tributarios para que el Gobierno pudiera cubrir el déficit que las sanciones internacionales causaban en los ingresos.

Aumento del precio de la gasolina

37. Tras un anuncio del Sr. Bernard Musset, "Ministro de Comercio e Industria" de Rhodesia del Sur, el 10 de mayo de 1966 se aumentó el precio de la gasolina en un chelín y tres peniques por galón, con lo que subió a cinco chelines y siete peniques para la calidad corriente y a seis chelines para la superior. El aceite para motores diesel aumentó en siete peniques, la parafina industrial en nueve peniques y la parafina para el alumbrado es cinco peniques por galón. El "Ministro adjunto de Agricultura" Sr. Lance Smith anunció que la ración de combustible de motores diesel para la agricultura, que se había fijado en el 50% del consumo del año anterior, se había elevado al 70% para los meses de junio, julio y agosto.

Congelación de las asignaciones de divisas para la importación

38. El régimen ilegal de Rhodesia del Sur decidió a finales de junio congelar todas las cuotas pendientes de divisas para la importación correspondientes al segundo período. Esta noticia fue anunciada el 15 de junio de 1966 por el Secretario de la entidad llamada Cámaras de Comercio Asociadas de Rhodesia, Sr. G. Taylor. Este según se informó dijo que la decisión del Gobierno no significaba que se cancelarían las cuotas a los importadores. La medida daría al Gobierno, du-

rante el último mes del período de asignación de cuotas que termina el 31 de julio, la oportunidad de redistribuir las asignaciones de divisas transfiriéndolas de las empresas que tenían un superávit a las que necesitaban una cantidad mayor.

Empréstitos en Rhodesia

39. En junio, el régimen ilegal emitió un empréstito de 4.500.000 libras. El "Banco de la Reserva" había anunciado ya el 9 de mayo de 1966 que el 1° de junio se emitiría a la par un empréstito por 25 años al 6,5%. Para el 15 de julio estaba prevista la amortización de un empréstito anterior de Rhodesia del Sur por valor de 4.500.000 libras, y los obligacionistas pudieron optar por la conversión de sus títulos en obligaciones de la nueva emisión ofreciéndoseles un interés del 6,5% sobre las obligaciones antiguas lo cual daba un 10,25% para las seis semanas de transición.

40. El 3 de mayo de 1966 se pidió en el Parlamento del Reino Unido al Ministro de Hacienda que hiciera una declaración sobre el pago garantizado de los intereses sobre los préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a Rhodesia del Sur. El Ministro de Hacienda dijo que el 2 de mayo de 1966 vencían los intereses por valor de 535.000 libras, de dos préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: uno de ellos al Gobierno de Rhodesia del Sur y otro a la Federación de Rhodesia y Niasalandia, del cual la mitad correspondía a Rhodesia del Sur. El Ministro informó al Parlamento que el Banco Internacional no había recibido esos pagos y, como la Tesorería de Su Majestad era fiadora de los préstamos, el Ministro había autorizado el reembolso al Banco Internacional de la suma correspondiente con cargo al Fondo Consolidado. Según el Ministro de Hacienda, esta suma se recuperaría de Rhodesia del Sur cuando se restableciera un gobierno constitucional.

41. En junio el Gobierno británico hizo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en concepto de interés y principal otros pagos por valor de 759.000 libras que Rhodesia del Sur no había satisfecho.

42. El 20 de mayo de 1966 el Banco de Inglaterra anunció que, como no se habían recibido fondos antes del cierre de las operaciones del 19 de mayo para satisfacer el pago de los intereses semestrales que vencían en esa fecha sobre los valores de Rhodesia del Sur al 6%, 1976-1979, no se habían despachado los cupones de intereses correspondientes a este pago.

43. Según un anuncio hecho por un portavoz del "Banco de la Reserva", el empréstito del Gobierno de Rhodesia por valor de 4.500.000 libras fue íntegramente suscrito cuando se abrieron las listas, las cuales se cerraron inmediatamente, en Salisbury el 1° de junio de 1966. El importe del empréstito a largo plazo se destinaría a financiar el programa de desarrollo preparado por el Gobierno y a hacer frente al vencimiento de valores.

44. Dicho portavoz dijo que el resultado había sido, como de costumbre, "sumamente satisfactorio". Agregó que muchas personas habían aceptado convertir en nuevas obligaciones de un valor nominal equivalente sus obligaciones del empréstito a largo plazo de Rhodesia del Sur que vencía en julio.

45. El 31 de mayo de 1966 el Gobierno del Reino Unido advirtió a los súbditos y residentes británicos que el empréstito de 4.500.000 libras que se proponía lanzar el régimen de Rhodesia del Sur era ilegal.

46. Dicho Gobierno señaló que el presente régimen ilegal de Rhodesia no podía contraer legalmente obligaciones en nombre del Gobierno de Rhodesia del Sur y que toda persona que prestara dinero o de otro modo concediera crédito a ese régimen o por cuenta del mismo, obraba exclusivamente a su propio riesgo.

Congelación de las reservas de Rhodesia

47. El *Times* de Londres del 21 de junio de 1966 informó que Rhodesia del Sur había perdido el control de sus reservas exteriores. El saldo de 23 millones de libras esterlinas que el Banco de la Reserva de Rhodesia poseía en noviembre último y que estaba depositado en bancos de Sudáfrica, Suiza y otros

países había sido congelado. El Consejo de Administración del Banco con sede en Londres, presidido por Sir Sydney Caine y nombrado por el Sr. Wilson en diciembre pasado, no había hecho ningún intento de usar ese dinero para cancelar las deudas contraídas por Rhodesia del Sur con los tenedores de títulos o con el Banco Mundial.

48. Sin embargo, la otra parte del Banco, administrada desde Salisbury, se hallaba en la misma imposibilidad de servir del dinero para pagar las importaciones. En tales circunstancias, se esperaba que el régimen del Sr. Smith tropezaría con dificultades cada vez mayores para utilizar ese saldo a fin de obtener créditos. Fuentes del Reino Unido afirmaron que la administración de Sir Sidney Caine había logrado localizar casi todos los fondos ya a fines de enero, y a partir de esa fecha había conseguido impedir su uso al Sr. Smith.

49. En efecto, los fondos mencionados se mantenían en reserva en nombre del pueblo de Rhodesia hasta tanto se hubiese resuelto el curso futuro de la gestión pública. Así, pues, lo único que Rhodesia había podido gastar eran las sumas obtenidas de las exportaciones, que en su mayor parte habían ido a Zambia y a Sudáfrica.

Relaciones comerciales y económicas entre la República de Sudáfrica y Rhodesia del Sur

50. En los párrafos 690 a 695 del capítulo III se describió la campaña de Rhodesia del Sur para activar las relaciones económicas con la República de Sudáfrica. Dicha campaña encaminada a aumentar el comercio entre los dos países había continuado desde la publicación de dicho documento.

51. En junio se esperaba la llegada a Rhodesia del Sur de seis miembros de una poderosa organización comercial sudafricana, que había sido invitada por el consejo encargado de fomentar el comercio de Rhodesia. Se creía que la misión tenía como fin examinar el desarrollo económico de Rhodesia y entrevistarse con las principales personalidades de los sectores mercantil y financiero de Salisbury, Bulawayo, Umtali, los condados centrales y el bajo *veld*.

52. Según una radioemisión de Johannesburgo del 7 de junio de 1966, una institución de garantía de Rhodesia del Sur (Rhodesian Industrial Confirming (Private) Limited) había establecido una sucursal en Johannesburgo para facilitar las gestiones de los exportadores de Sudáfrica a Rhodesia del Sur. La compañía se ocupaba de que los exportadores sudafricanos obtuviesen el pago en efectivo y de la concesión de crédito a los importadores de Rhodesia. Asimismo, se esperaba que dicha compañía ayudase a los exportadores sudafricanos a encontrar mercados en Rhodesia. La compañía es una filial de la Industrial Corporation of Rhodesia y empezó a funcionar en abril. El gerente de Johannesburgo, Coronel R. Jones, dijo que su compañía se interesaba también en garantizar el comercio entre Rhodesia del Sur y otros mercados.

53. El Sr. Van den Berg, director del Handel Institute, dijo hace poco que la delegación del instituto que visitó Rhodesia había propuesto la concesión de cuotas a fábricas de Rhodesia del Sur para exportar a la República mercaderías libres de derechos aduaneros o con una reducción. Según el Sr. Van den Berg, dicha propuesta tenía por objeto, entre otras cosas, ayudar a Rhodesia del Sur a resarcirse de la pérdida del mercado de exportación de Zambia.

54. Se informó también que el 13 de junio de 1966 el "Funcionario Administrador del Gobierno" había dado posesión, a una Comisión de estudio, integrada por tres personas y creada para estudiar otras posibles vías de acceso a Sudáfrica. Se esperaba que la Comisión examinase dos propuestas que se le habían presentado: la prolongación de la línea actual de Bulawayo que termina en West Nicholson, y la construcción de una línea hasta la República de Sudáfrica desde Rutenga, estación de la línea ferroviaria de Lourenço Marques.

Relaciones comerciales y económicas entre Portugal y Rhodesia del Sur

55. En el acuerdo comercial quinquenal entre Rhodesia del Sur y Portugal, los signatarios convinieron en aplicar a sus respectivos productos la cláusula de la "nación más favorecida".

56. En marzo último, se informó desde Lisboa que se había entregado a Portugal, a título de ensayo, un cargamento de 133 toneladas de carne vacuna de Rhodesia del Sur. No se tienen más noticias de nuevas compras de carne de Rhodesia por parte de Portugal.

57. El Sr. Franco Nogueira, Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, dijo en mayo de este año, en una conferencia de prensa, que Portugal nunca había tomado parte en las sanciones contra Rhodesia del Sur. Añadió que el Gobierno portugués no pondría obstáculos al transporte privado entre países sin litoral.

58. *The New York Times* del 3 de julio de 1966 aludió a un informe oficial británico sobre las sanciones económicas contra Rhodesia del Sur, en que se dice que una de las principales evasiones a las mismas eran las ventas de tabaco y azúcar a Portugal.

Relaciones comerciales y económicas entre la República Federal de Alemania y Rhodesia del Sur

59. Según se informó, el Ministro de Economía de la República Federal de Alemania había dicho que las exportaciones alemanas a Rhodesia del Sur habían ascendido el año pasado a 54.100.000 marcos alemanes (4.060.000 libras esterlinas). Según ciertos informes, la cifra correspondiente a diciembre de 1965, después de la aplicación del embargo, fue de 1.900.000 marcos (171.000 libras esterlinas). En enero aumentó a 3.700.000 marcos (330.000 libras esterlinas) y en febrero disminuyó a 2.500.000 marcos (225.000 libras esterlinas). Se informó que las importaciones de Alemania procedentes de Rhodesia del Sur ascendieron el año pasado a 140.400.000 marcos (12.636.000 libras esterlinas). Las cifras de diciembre, enero y febrero fueron 12.400.000 marcos (1.116.000 libras esterlinas), 13.000.000 de marcos (1.170.000 libras esterlinas) y 6.400.000 marcos (576.000 libras esterlinas), respectivamente. El año pasado el tabaco representó más de la tercera parte de las importaciones de Alemania occidental procedentes de Rhodesia.

60. Se informó que en el mes de mayo el Gobierno de la República Federal de Alemania había puesto en vigor un embargo parcial sobre mercaderías de Rhodesia del Sur, como el tabaco. El 20 de mayo de 1966, el Gabinete anunció que en lo sucesivo todas las importaciones procedentes de Rhodesia debían ir acompañadas de los permisos correspondientes y que no se preveía la concesión de ningún permiso. Sin embargo, en el caso especial del asbesto, la decisión dependería en la práctica del costo de los suministros sustitutivos procedentes del Canadá.

Relaciones comerciales y económicas entre el Japón y Rhodesia del Sur

61. Por carta de fecha 15 de junio de 1966, el Representante Permanente del Japón en las Naciones Unidas informó al Secretario General sobre la política del Japón en lo relativo al comercio con Rhodesia del Sur, a saber:

62. "En cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, el Gobierno del Japón ha estado haciendo todo lo posible por impedir totalmente la importación de productos procedentes de Rhodesia del Sur.

63. "Además de las medidas ya aplicadas, el Gobierno del Japón acaba de adoptar las medidas necesarias para impedir toda nueva importación al Japón de asbesto procedente de Rhodesia del Sur, y espera poder satisfacer sus necesidades de asbesto importado mediante suministros obtenidos de otras fuentes. Además, con la cooperación de los sectores industriales y comerciales interesados, hace pocos meses se suspendió la importación al país de cromo procedente de Rhodesia del Sur."

Relaciones comerciales y económicas entre Zambia y Rhodesia del Sur

64. La empresa Rhodesia Railways obtiene sus principales utilidades transportando carbón de Rhodesia del Sur a las minas de cobre de Zambia y el cobre de estas minas al puerto de

Beira (Mozambique). La sede y los talleres principales del ferrocarril están en Rhodesia del Sur. Hay también talleres en la localidad minera de Broken Hill en Zambia.

65. El órgano directivo de Rhodesia Railways es un Consejo en el que Zambia y Rhodesia del Sur tienen tres miembros cada una. El Sr. A. R. Kemp de Rhodesia del Sur es el Presidente independiente del Consejo.

66. Zambia, uno de los principales países del mundo exportadores de cobre, envía por ferrocarril a través de Rhodesia prácticamente toda su producción (700.000 toneladas al año), que representa casi el 15% de la producción total de cobre lanzada al mercado mundial. De las mercancías transportadas por el ferrocarril, lo que más utilidades deja es, pues, el cobre. En el último ejercicio financiero, el valor de los fletes de ese transporte fue algo más de 10 millones de libras esterlinas, procedentes casi en su totalidad de Zambia, y representó alrededor del 25% de los ingresos totales del ferrocarril.

67. En mayo, el servicio de control de cambios de Zambia tomó medidas para no permitir que se girasen fondos del ferrocarril al régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Poco después, el régimen de Rhodesia del Sur decidió, como represalia, exigir un pago anticipado para permitir el transporte ferroviario de Zambia a través de Rhodesia.

68. En una declaración hecha en Lusaka el 14 de mayo de 1966, en nombre del Presidente de Rhodesia Railways, Sr. A. R. Kemp, se dijo que uno de los principales problemas con que tropezaba el sistema mixto era que el servicio de control de cambios de Zambia se negaba a permitir el giro de fondos del ferrocarril a Rhodesia. El Sr. Kemp se refería a una declaración del Sr. Wina, Ministro de Hacienda de Zambia, quien sostenía que el ferrocarril no tenía los fondos ni los medios para continuar las operaciones normales en Rhodesia del Sur. El Sr. Kemp dijo que resultaba difícil mantener el ferrocarril en funcionamiento debido a las medidas adoptadas por el servicio de control de cambios de Zambia.

69. Posteriormente, el Consejo de Administración del ferrocarril, por mayoría de cuatro votos contra tres (los tres miembros de Zambia) decidió acceder a la solicitud de pago anticipado presentada por Rhodesia del Sur. Al referirse a la decisión del Consejo de Administración del ferrocarril el Presidente Kaunda dijo que, con pleno conocimiento del Sr. Ian Smith, "Primer Ministro" de Rhodesia del Sur, esa decisión había sido adoptada por una camarilla ilegal que se había arrogado la autoridad de administrar el Banco de la Reserva de Rhodesia. El Sr. Kaunda añadió que dicha camarilla había actuado ilegalmente, pues el banco había sido suspendido por el Gobierno británico.

70. El 23 de mayo se informó que el Gobierno británico había enviado a Lusaka una misión presidida por la Sra. Judith Hart, Ministra de Estado (Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*), para entablar urgentemente conversaciones con el Presidente Kaunda y sus Ministros a fin de prevenir la crisis que se cernía en ese momento entre Rhodesia y Zambia debido al entorpecimiento del comercio y del tráfico ferroviario. En un comunicado emitido por la Oficina de Relaciones con el *Commonwealth*, se decía simplemente que, en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de Gran Bretaña y Zambia, la Sra. Judith Hart, Ministra de Estado para las relaciones con el *Commonwealth*, se trasladaría por vía aérea a Lusaka para celebrar conversaciones con las autoridades de Zambia.

71. El Presidente Kaunda señaló que los funcionarios de Zambia estarían facultados para discutir con la Sra. Hart y los miembros de la misión británica únicamente la cuestión de las vías sustitutivas de abastecimiento, y que no se podría de ningún modo hacer que Zambia cambiase de actitud con respecto a la cuestión de las tarifas ferroviarias.

72. Se informó que las acciones de las compañías explotadoras del cobre bajaron bruscamente el 18 de mayo al publicarse la noticia de que el Rhodesia Railways pedía un pago anticipado por el transporte de las exportaciones de cobre de Zambia. El 27 de mayo se informó también que los principa-

los productores de este país habían invocado la cláusula contractual que les permitía demorar las entregas. Como justificación, alegaron que no dependía de ellos el que Rhodesia Railways se hubiera negado a permitir el paso del cobre de Zambia por el país mientras no cumplierse ciertos requisitos, tales como dicho pago anticipado. Debido a ello los precios del cobre aumentaron bruscamente. El precio en efectivo del cobre en barra para alambre aumentó 28 libras esterlinas 5 chelines y cerró a 647 libras esterlinas la tonelada, mientras que el precio con plazo de entrega de tres meses subió 25 libras esterlinas 5 chelines y llegó a 608 libras esterlinas la tonelada.

73. El 31 de mayo de 1966, un tren de Rhodesia Railways que transportaba cobre y zinc exportado por Zambia cruzó la frontera y se internó en Rhodesia del Sur, sin contratiempos. Según un comunicado de Reuters procedente de Livingston, Zambia dijo que dudaba de que se permitiese el paso del tren después del fallo del Tribunal Supremo de Zambia de 29 de mayo de 1966, por el cual se prohibían temporalmente al ferrocarril de propiedad conjunta aplicar a los fletes el nuevo sistema de pago adelantado.

74. Refiriéndose a una orden del "Ministerio de Transporte" de Rhodesia del Sur de 11 de junio de 1966 sobre el tráfico en tránsito hacia Zambia y procedente de este país, las autoridades de Rhodesia Railways en Bulawayo dijeron el 14 de junio de 1966:

"Todo el tránsito con excepción del exceso de equipaje de los viajeros en cualquiera dirección y de las mercaderías consignadas hacia Zambia o procedentes de este país, a porte debido y porte pagado, queda comprendido en las disposiciones del Gobierno. En cuanto al tránsito de otra índole, el ferrocarril deberá hacer que el pago de las tarifas ferroviarias ya aplicadas o que se apliquen en sus líneas de Rhodesia y Bechuanalandia se efectúe en Rhodesia en forma aceptable para el Banco de la Reserva. Antes que las mercancías salgan de Rhodesia el ferrocarril debe demostrar al Banco de la Reserva que se han tomado las disposiciones necesarias para pagar a los ferrocarriles vecinos las tarifas y demás cargos adeudados por el transporte de dichas mercaderías en sus respectivos sistemas."

75. Además, el 18 de junio de 1966, un portavoz de Rhodesia Railways dijo en Salisbury que el cobre y demás mercaderías de Zambia en tránsito por Rhodesia del Sur no se moverían mientras no se hubiese llegado a un acuerdo entre Zambia y Mozambique sobre el pago de los fletes. El cobre, que en ese momento estaba retenido en Rhodesia del Sur por la controversia con Zambia, no se movería mientras no se concertasen acuerdos satisfactorios de pagos. El portavoz añadió que en Rhodesia estaban inmovilizados 342 vagones en la espera de una decisión entre Zambia y Mozambique. Sin embargo, confirmó que Zambia había facilitado fondos para satisfacer las exigencias del servicio de control de cambios de Rhodesia del Sur. Se informó asimismo que la cantidad adeudada por fletes, que según se dijo ascendía a unas 150.000 libras esterlinas, se había pagado en dólares de los Estados Unidos.

76. Dos días después, el 20 de junio de 1966, el portavoz del ferrocarril dijo que unas 16.000 toneladas de cobre exportado por Zambia estaban detenidas en Rhodesia del Sur. El cobre, cuyo valor se calculaba en 10 millones de libras esterlinas, iba consignado al puerto de Mozambique, y su detención se debía a que ni las autoridades de Zambia ni las portuguesas habían comunicado el pago en efectivo por adelantado para el tránsito del mineral a través de Mozambique. El portavoz confirmó que los fletes del transporte a través de Rhodesia del Sur se habían pagado por adelantado.

77. Según emisiones de radio de Lusaka del 22 de junio de 1966, el Presidente Kenneth Kaunda se refirió a las 16.000 toneladas de cobre que estaban detenidas por orden del régimen de Rhodesia del Sur y explicó que la entrega del dinero exigido por los rebeldes para el paso del cobre no significaba un cambio de política. Dijo que Zambia tenía que optar entre dejar que el cobre quedase en la Rhodesia rebelde o pagar la cantidad que se le pedía. Según él, Zambia optó por esto último.

78. Después de anunciar que el Gobierno de Zambia se proponía cortar todas sus relaciones comerciales con Rhodesia del Sur, el Presidente Kaunda dijo que ello incluiría el comercio de carbón tan pronto como se dispusiese de fuentes sustitutivas.

79. Según el Sr. Ian Smith, las exportaciones de artículos manufacturados de Rhodesia del Sur a Zambia ascendieron el año pasado a unos 30 millones de libras esterlinas, lo que representa la mitad de las exportaciones de dichos artículos de Rhodesia del Sur. Como ya se indicó, las autoridades de Rhodesia del Sur estudian la posibilidad de aumentar las ventas a la República de Sudáfrica para compensar la posible pérdida del mercado de Zambia.

F. EL EMBARGO DEL PETRÓLEO

La República de Sudáfrica y Rhodesia del Sur: el embargo del petróleo

80. El capítulo III (párrs. 732 a 735) contiene información sobre la República de Sudáfrica y el embargo del petróleo.

81. Según noticias relativas al suministro de petróleo a Rhodesia del Sur, el transporte de dicho combustible desde Sudáfrica continuaba principalmente por carretera y ferrocarril. Se estimaba que las importaciones a Rhodesia del Sur de petróleo procedente de la República de Sudáfrica cubrían con exceso las necesidades una vez en vigor el sistema de racionamiento impuesto después de la declaración ilegal de independencia. Ello no obstante, Rhodesia aumentó hace poco el precio de la gasolina en un 25%.

Portugal y Rhodesia del Sur: el embargo del petróleo

82. Los datos relativos a Portugal y al embargo del petróleo figuran en el capítulo III, párrs. 724 a 731.

83. A principios de mayo se informó que la principal fuente de gasolina con que contaba Rhodesia del Sur era el transporte por ferrocarril a través de Mozambique desde Sudáfrica. Al aclarar la posición de su Gobierno, el Sr. Franco Nogueira, Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, dijo en una conferencia de prensa que Portugal nunca había tomado parte en las sanciones contra Rhodesia, pero que había optado por no participar activamente en el abastecimiento del petróleo. Según las informaciones, el Sr. Nogueira dijo que Portugal también había dado garantías de que no se cedería a Rhodesia "petróleo que llegase a Mozambique para nosotros o Zambia o para Malawi". Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores añadió que Portugal no podía "intervenir en el transporte privado entre países sin litoral".

84. Confirmando una noticia aparecida anteriormente en la prensa, según la cual el Reino Unido había concertado un acuerdo con la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia según el cual se pagarían a ésta 54.000 libras esterlinas mensuales, al parecer en la inteligencia de que el oleoducto estaría vedado al petróleo destinado a Rhodesia, el Sr. Bottomley anunció, en una contestación escrita dirigida a la Cámara de los Comunes el 17 de mayo de 1966, que el Gobierno había convenido en contribuir por algún tiempo a sufragar los gastos de la empresa encargada de dicho oleoducto y, en particular, los de conservación y reparación del mismo y sus instalaciones, dado que el oleoducto había dejado de usarse.

Efectos de las sanciones económicas internacionales contra Rhodesia del Sur

85. Durante los meses de abril y mayo, las autoridades de Rhodesia del Sur, al analizar la situación del Territorio seis meses después de la declaración unilateral de la independencia, dijeron que las sanciones de Gran Bretaña habían tenido escaso efecto y que las tiendas estaban llenas de mercaderías. Añadieron que, en tales circunstancias, Rhodesia del Sur había iniciado las conversaciones de Londres en una clara posición de fuerza⁴.

⁴ Summary of World Broadcasts, No. 2161, parte 4, 14 de mayo de 1964.

86. El 9 de mayo, en una reunión de la Cámara de Comercio de Gwelo, el Sr. Musset, "Ministro de Comercio e Industria", dijo que Rhodesia del Sur había aumentado su comercio con muchos países no africanos desde la declaración de la independencia de noviembre pasado. Añadió que, como resultado, se esperaba que los países que habían aplicado sanciones contra Rhodesia del Sur tendrían plena conciencia del cambio de condiciones de una situación que no podía evolucionar sino en su perjuicio. Desde la "independencia", dijo el Sr. Musset, Rhodesia del Sur había recibido muchos visitantes interesados en hacer inversiones en el país, los cuales se prestaban a recoger los pingües beneficios que se les presentaban.

87. El 15 de junio de 1966, el Sr. Bottomley, Secretario de Estado para las relaciones con el *Commonwealth*, declaró en la Cámara de los Comunes: "Los hechos recientes, incluidos algunos importantes reconocidos por el propio régimen, justifican ampliamente mis aseveraciones de abril sobre la eficacia de nuestra política, que estamos dispuestos a mantener hasta que Rhodesia vuelva al Gobierno constitucional." El Sr. Bottomley añadió: "Hemos logrado obtener un apoyo internacional abrumador para nuestras sanciones económicas contra Rhodesia, y ahora hemos vedado al régimen ilegal el acceso a casi todos los mercados normales de exportación de Rhodesia, aparte de Sudáfrica".

88. En respuesta a una observación del Sr. Edward Taylor (Glasgow, Cathcart, C.), el cual afirmó que el tabaco de Rhodesia del Sur se vendía en los mercados holandeses y alemanes, el Sr. Bottomley contestó que "la información del honorable miembro no coincide con las noticias que tengo al respecto". El Sr. Bottomley también confirmó que eran infundados los rumores de que el Gobierno se disponía a levantar las sanciones en el curso de las conversaciones.

89. Según *The New York Times* del 3 de julio de 1966, en un informe británico reciente se decía lo siguiente: "Ni los hombres de negocios ni el régimen creen ya que las sancio-

nes sean de corta duración y que bastará con un breve período de privaciones para superarlas. Ese convencimiento fue una de las razones principales que indujeron a Smith a pedir que se celebrasen las conversaciones. La situación económica se agrava a medida que pasan las semanas. El tiempo no está, pues, a favor del Sr. Smith".

90. Por otra parte, el Sr. Ian Smith dijo en un congreso anual de agricultores celebrado en Salisbury el 21 de junio de 1966: "Lo último que haremos será capitular". Añadió que su "Gobierno" se proponía seguir luchando, pese a la presión de las sanciones comerciales internacionales.

91. El Sr. Clifford Dupont, "funcionario Administrador del Gobierno", declaró en la apertura del "Parlamento de Rhodesia", el 22 de junio de 1966, que la aplicación de las sanciones había traído consigo el control de las importaciones. Añadió que las molestias que ello ocasionaba a los pueblos de Rhodesia, y sobre todo a los comerciantes, habían sido aceptadas con gran espíritu de sacrificio y cooperación. Dichos controles no habían estado exentos de ventajas positivas, que los industriales se habían apresurado a explotar. Aunque aún no se veían las pruebas claras del desarrollo acelerado de la industria, aparecían continuamente en el mercado nuevos productos para sustituir a las importaciones. Los industriales continuaban el proceso de expansión y diversificación, y empezaban a producir artículos cuya fabricación les habría parecido imposible algunos meses antes. Los planes para poner en marcha lo antes posible grandes proyectos en la industria manufacturera funcionaban satisfactoriamente.

92. Según la declaración del Sr. Dupont, el régimen continuaría facilitando en el mayor grado posible las divisas a fin de adquirir los bienes de capital y las materias primas necesarios para los nuevos proyectos de inversión. Continuarían los esfuerzos para la expansión del comercio y el establecimiento en otros países de relaciones económicas más estrechas de carácter bilateral.

CAPÍTULO IV*

AFRICA SUDOCCIDENTAL

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN 1965

1. El 17 de junio de 1965, en su 372a. sesión, celebrada en Addis Abeba, Etiopía, el Comité Especial aprobó una resolución sobre el África Sudoccidental en la que reafirmó el derecho del pueblo del Territorio a la libre determinación y a la independencia y condenó al Gobierno de Sudáfrica por su persistente negativa a poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial. Reconoció como legítima la lucha del pueblo del África Sudoccidental por lograr el efectivo ejercicio de los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, e instó a todos los Estados a que dieran a la población africana del Territorio el necesario apoyo moral y material que le permitiera alcanzar la independencia nacional y ejercitar cabalmente su soberanía sobre los recursos naturales de su país. Por la misma resolución, el Comité Especial, después de referirse a las manifestaciones de preocupación de los Gobiernos de los Estados africanos lindantes con el África Sudoccidental, con motivo de las instalaciones militares que el Gobierno de Sudáfrica había establecido en el Territorio, incluso una importante base militar en el Ca-

privi Zipfel Oriental, pidió al Gobierno de Sudáfrica que retirara inmediatamente todas las bases y demás instalaciones militares situadas en el Territorio y que cesara de emplear a éste, de la manera que fuere, como base para la concentración de armamentos o fuerzas armadas con propósitos internos o externos. Recomendó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad que adoptaran providencias adecuadas para proteger la soberanía del pueblo del África Sudoccidental y la integridad del Territorio y que, a este fin, tomara las medidas concretas y adecuadas que se requirieran en cooperación con la Organización de la Unidad Africana (OUA). Señaló también a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación que prevalecía en el Territorio. Instó al Secretario General a que pidiera a todos los Estados que le informaran respecto de las medidas que hubieran tomado para poner en práctica el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 1899 (XVIII) del 13 de noviembre de 1963; le invitó también a que informara a la Asamblea General y al Comité Especial respecto a la aplicación de ese párrafo.

2. El texto de la resolución se incluyó en el informe presentado por el Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000, Rev.1¹, cap. IV, párr. 285). Ese informe, así como los presentados por el Comité Especial a la Asamblea Ge-

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.2.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

neral en 1964 sobre el Africa Sudoccidental (A/5800/Rev.1², cap. IV) y sobre las consecuencias de las actividades de la industria minera y de las demás sociedades internacionales que tienen intereses en el Africa Sudoccidental³ fueron examinados por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones. El 17 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó tres resoluciones relativas al Africa Sudoccidental.

3. En los párrafos del preámbulo de la resolución 2074 (XX), del 17 de diciembre de 1965, la Asamblea General, después de recordar su resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, así como anteriores resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial relativas al Africa Sudoccidental, tomó nota con pesar de la política seguida por el Gobierno de Sudáfrica para frustrar los derechos políticos y económicos del pueblo autóctono del Africa Sudoccidental, mediante el asentamiento de gran número de inmigrantes extranjeros. En el noveno párrafo del preámbulo, la Asamblea General advirtió "con viva preocupación que en esa región de Africa existe una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, y que esa amenaza se ha agravado más aún con la rebelión racista de Rhodesia del Sur". Los párrafos dispositivos de la resolución dicen así:

[La Asamblea General,]

"1. *Aprueba* los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales relativos al Africa Sudoccidental;

"2. *Apoya* las conclusiones y recomendaciones que formula el Comité Especial en su informe sobre las consecuencias de las actividades de la industria minera y de las demás sociedades internacionales que tienen intereses en el Africa Sudoccidental;

"3. *Reafirma* el inalienable derecho del pueblo del Africa Sudoccidental a la libertad y a la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"4. *Condena* la política de *apartheid* y de discriminación racial seguida por el Gobierno de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental, que constituye un crimen contra la humanidad;

"5. *Considera* que todo intento de dividir el Territorio o de adoptar medidas unilaterales que directa o indirectamente preparen dicha división constituye una violación del Mandato y de la resolución 1514 (XV);

"6. *Considera asimismo* que todo intento de anexionar una parte o la totalidad del Territorio del Africa Sudoccidental constituye un acto de agresión;

"7. *Insta* al Gobierno de Sudáfrica a retirar inmediatamente todas las bases y otras instalaciones militares situadas en el Territorio del Africa Sudoccidental y a abstenerse de utilizar el Territorio en forma alguna como base militar con fines internos o externos;

"8. *Condena* la política seguida por los grupos de intereses económicos que operan en Africa Sudoccidental, los cuales explotan sin piedad los recursos humanos y materiales, impiden el progreso del Te-

rritorio y frustran el derecho del pueblo a la libertad y a la independencia;

"9. *Condena* la política seguida por el Gobierno de Sudáfrica para frustrar indirectamente los derechos políticos y económicos de la población autóctona del Territorio mediante el asentamiento en el mismo de gran número de inmigrantes extranjeros;

"10. *Condena* al Gobierno de Sudáfrica por negarse a colaborar con las Naciones Unidas en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"11. *Pide* a todos los Estados que adopten medidas inmediatas para poner en práctica el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General;

"12. *Insta* a todos los Estados a que den a la población autóctona del Africa Sudoccidental todo el apoyo moral y material que necesita en su lucha legítima por la libertad y la independencia;

"13. *Pide* al Consejo de Seguridad que mantenga en observación la crítica situación existente en el Africa Sudoccidental teniendo en cuenta el noveno párrafo del preámbulo de la presente resolución."

4. Por la resolución 2076 (XX), del 17 de diciembre de 1965, relativa a programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental, la Asamblea General expresó su agradecimiento a los Estados Miembros que otorgaron becas y subsidios de viaje a habitantes del Africa Sudoccidental, e invitó a éstos y a otros Estados a que consideraran la posibilidad de incluir en sus ofrecimientos becas de enseñanza secundaria y de formación profesional y técnica. Invitó asimismo a los Estados Miembros a que consideraran favorablemente las peticiones del Secretario General para que admitieran en sus escuelas secundarias, profesionales o técnicas a los candidatos que hubieran obtenido becas conforme al programa especial de capacitación para los habitantes del Africa Sudoccidental. Una vez más, la Asamblea General pidió a todos los Estados Miembros y en particular a Sudáfrica, que facilitara los viajes de los habitantes del Africa Sudoccidental que trataran de aprovechar las posibilidades de instrucción que se les ofrecen en virtud del programa. Exhortó también a Sudáfrica a que cooperase con el Secretario General en la aplicación de la resolución. Pidió al Secretario General que difundiera en el Africa Sudoccidental y en otros lugares información relativa a los programas de becas. Le pidió también que consultara al Comité Especial con respecto a la ejecución de los programas y que informara sobre el particular a la Asamblea General.

5. El proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial con respecto a las peticiones relativas al Africa Sudoccidental (A/6000/Rev.1, cap. IV, párr. 292) fue aprobado por la Asamblea General como resolución 2075 (XX).

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Generalidades

6. En anteriores informes del Comité Especial a la Asamblea General⁴ se da información sobre el Te-

⁴ *Ibid.*, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del programa, documento A/5238, cap. IX; *ibid.*, decimotercero período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1, cap. IV; *ibid.*, deci-

² *Ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8.

³ *Ibid.*, anexo No. 15, documento A/5840.

ritorio. A continuación se proporcionan datos suplementarios sobre los acontecimientos registrados recientemente.

Corte Internacional de Justicia

7. Las actuaciones orales relativas a las demandas sobre el África Sudoccidental entabladas el 4 de noviembre de 1960 por los Gobiernos de Etiopía y de Liberia contra Sudáfrica fueron cerradas el 15 de noviembre de 1965. El 29 de noviembre, en su 100a. sesión pública sobre las demandas, la Corte Internacional de Justicia anunció su decisión respecto de la solicitud formulada por Sudáfrica el 30 de marzo de 1965 de que la Corte efectuara una inspección *in loco* del África Sudoccidental y visitara asimismo Sudáfrica, Etiopía y Liberia y uno o dos países situados al Sur del Sáhara. Por 8 votos contra 6, la Corte resolvió no acceder a la solicitud referente a las propuestas acerca del África Sudoccidental y de Sudáfrica, y por 9 votos contra 5 en lo tocante a las otras zonas.

8. En un comunicado de fecha 13 de diciembre de 1965, la Corte señaló que había celebrado un intercambio general de opiniones sobre las diversas cuestiones que surgían de las demandas y que había suspendido las sesiones a efecto de permitir que sus miembros estudiaran tales cuestiones. El comunicado señalaba que, de conformidad con la práctica establecida de la Corte, luego de concluida la audiencia, se concede a los jueces un período de tiempo adecuado a la naturaleza del caso a fin de que puedan estudiar los alegatos verbales de las partes. Indicaba, asimismo, que ese caso era de índole tan extensa y complicada que el estudio requeriría un lapso algo más prolongado de lo normal.

9. Los miembros de la Corte Internacional reanudaron sus sesiones privadas en La Haya, el 3 de marzo de 1966, para formular el fallo de la Corte acerca de las demandas referentes al África Sudoccidental.

Declaraciones relativas al futuro del África Sudoccidental

10. La relación estratégica entre el Territorio del África Sudoccidental y Sudáfrica, que había sido una de las principales razones aducidas por Sudáfrica en 1946 para apoyar su plan de incorporación del Territorio⁵ fue nuevamente puesta de relieve, durante 1965, por importantes voceros del Gobierno sudafricano.

11. Se ha informado que el Primer Ministro de Sudáfrica, Sr. H. F. Verwoerd, en un discurso dirigido a una reunión del National Party en De Aar, Sudáfrica, el 27 de junio de 1965, dijo que, de caer el África Sudoccidental en manos de naciones hostiles, ello podría ser fatal para Sudáfrica. En las Naciones Unidas se dijo que poco le costaría a Sudáfrica presentar un informe sobre el África Sudoccidental o permitir la presencia de las Naciones Unidas en ella, observó el Primer Ministro. Sin embargo, Sudáfrica había sabido desde un principio que una vez que se permitiese la injerencia, ésta aumentaría gradualmente. Nadie debía

hacerse ilusiones al respecto. El Primer Ministro explicó que, precisamente a causa del peligro en potencia para Sudáfrica, el Primer Ministro Malan había dicho que Sudáfrica no permitiría la intervención extranjera en el Territorio y que ése era el motivo por el cual la República había estado empleando, en los últimos tiempos, todo su poder diplomático y toda su habilidad jurídica para intentar evitar que tal peligro llegase a sus fronteras.

12. El Ministro de Justicia de Sudáfrica, Sr. Balthazar Vorster, dirigiéndose a un congreso del National Party en Windhoek, África Sudoccidental, el 31 de agosto de 1965, informó a los allí reunidos que lo que afectaba al África Sudoccidental afectaba a la República, y viceversa. Luego de referirse a "los disturbios de Langa y Sharpeville de 1960, no como ejemplos aislados de algo espontáneo", sino como "parte de una invasión en ciernes", el Ministro de Justicia — según se informó — había dicho lo siguiente:

"Mi Ministerio tiene la obligación de mantener la ley y el orden aquí, y esa misión se le confirió a la Unión en la época del Mandato. Tenemos intenciones de cumplirla; nos encargaremos de que aquí reinen la paz, la ley y el orden. No os dejéis adormecer por una falsa sensación de seguridad en virtud de que hemos rechazado el pasado intento. Aseguraos de que no vuelva a ocurrir. El ataque contra Sudáfrica ha de repetirse; vendrá del exterior y estará mejor organizado que antes. Vosotros, como ciudadanos, tenéis no sólo el deber de defender lo que os pertenece, sino también el sagrado deber de hacerlo. Debéis colaborar con la policía, especialmente en el comienzo, hasta que se puedan traer refuerzos desde otra parte. No digo esto para asustaros, sino porque la historia me ha enseñado que estos intentos sólo prosperan allí donde los ciudadanos son débiles. Sucederá una sola vez y no habrá de repetirse. No tendréis una segunda oportunidad de reaccionar y defenderos."

13. En su mensaje anual de Año Nuevo, el Primer Ministro de Sudáfrica, refiriéndose a las demandas que la Corte tenía ante sí, declaró:

"Cualquiera sea su resultado, que esperamos con optimismo, Sudáfrica cumplirá sus obligaciones en lo tocante a sus principios, a aquellos confiados a su cuidado y a la preservación de la seguridad y la integridad de la República."

14. Más adelante, en un discurso preelectoral pronunciado en Windhoek el 15 de marzo de 1966, el Primer Ministro pidió al electorado que no se entregase a reacciones violentas cuando la Corte Internacional diera a conocer su veredicto ulteriormente, en el curso del año, tanto que ese veredicto fuese favorable a Sudáfrica como que no lo fuese. Señaló:

"Os pido que dejéis el asunto en las serenas manos del gobierno que vais a elegir. El gobierno hará lo que constituya nuestro interés común. Seguiremos el rumbo seguro, correcto y sensato, y confiaremos en el apoyo de la opinión pública de Sudáfrica y del África Sudoccidental."

15. El Primer Ministro explicó luego que la cuestión que los votantes debían decidir era qué partido podía garantizar mejor la prosperidad, la seguridad del país y la continuación del predominio blanco. Declaró que era la firme creencia del Gobierno que Sudáfrica

monoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I), documento A/5800/Rev.1, cap. IV; ibid., anexo No. 15, documento A/5840; e ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/6000/Rev.1, cap. IV.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, segunda parte del primer período de sesiones, Cuarta Comisión, parte I, anexo 13 (A/123).

y el Africa Sudoccidental representaban un solo país y que esto había evitado más injerencias en el Territorio.

Leyes de seguridad

Criminal Procedure Amendment Act, 1965

16. En su informe anterior (A/6000/Rev.1, cap. IV, párr. 11), el Comité Especial informó a la Asamblea General que, en enero de 1965, tanto en el Africa Sudoccidental como en Sudáfrica, se había suspendido la aplicación de las leyes que autorizaban a arrestar, por plazos de hasta 90 días, a cualquier persona.

17. Sin embargo, más entrado el año se dictó en el Africa Sudoccidental y en Sudáfrica una disposición más severa, comúnmente llamada "cláusula de los 180 días", en virtud de la *Criminal Procedure Amendment Act, No. 96*, de 1965. Esta ley autoriza el encarcelamiento e incomunicación de testigos o de posibles testigos en ciertos tipos de procedimientos criminales, por un máximo de seis meses, si el Procurador General opina que pueden ser sobornados o intimidados, o pueden substraerse a la acción de la justicia, o si lo considera beneficioso para sus intereses o para los intereses de la administración de justicia. Dicha ley exige que las personas detenidas de ese modo sean visitadas en privado por un juez al menos una vez por semana; quedan prohibidos otros visitantes, excepto con el consentimiento del Procurador General o de un funcionario autorizado por él. Los tipos especificados de procedimientos criminales se refieren, entre otros, a la infracción de diversas disposiciones de la *Suppression of Communism Act*, sedición, asesinato, incendio, rapto, traición y robo, y comprenden cualquier conspiración, incitación o tentativa para cometer los delitos especificados.

18. La ley dispone específicamente que ningún tribunal tendrá jurisdicción para ordenar la puesta en libertad de las personas así detenidas ni para pronunciarse sobre la validez de cualquier disposición formulada por el Procurador en relación con dichas detenciones, ni tendrá jurisdicción sobre la negativa de permiso a un visitante.

Official Secrets Amendment Act, 1965

19. El Comité Especial también se refirió en su informe anterior a una enmienda propuesta al *Official Secrets Act* para prohibir que se revele cualquier asunto militar o policial bajo multa de hasta 1.500 rand, o siete años de cárcel, o ambas penas. La ley original ya prohibía que se revelase cualquier información relativa a cualquier asunto militar o policial. El Parlamento de Sudáfrica aprobó el proyecto de ley después de enmendarlo para insertar una definición de "asunto policial" con el significado de cualquier asunto relativo al mantenimiento de la seguridad nacional de la Unión (con inclusión del Africa Sudoccidental) o el mantenimiento de la ley y el orden por la policía de Sudáfrica. Entró en vigor en el Africa Sudoccidental y Sudáfrica como Ley No. 65 de 1965.

Police Amendment Act, 1965

20. En virtud de la *Police Amendment Act, No. 74*, de 1965, el Parlamento de Sudáfrica ha autorizado a cualquier miembro de las fuerzas de policía para que "registren sin mandamiento a cualquier persona, local, otro lugar, vehículo, embarcación o aeronave, o cual-

quier receptáculo de cualquier clase" en cualquier lugar de la República o del Africa Sudoccidental dentro de una milla de la frontera de cualquier Estado o territorio extranjero, y para que "se incauten de cualquier cosa que encuentren en poder de dicha persona o en dicho local, otro lugar, vehículo, embarcación, aeronave o receptáculo". Según explicó el Ministro de Justicia de Sudáfrica, la *Amendment Act* es una nueva medida de seguridad, destinada a dotar a la policía del poder de combatir con la mayor eficacia posible la infiltración de saboteadores bien entrenados y preparados en otros lugares de Africa.

21. Las fuerzas de policía que actúan en el Africa Sudoccidental, con inclusión de la Brigada Especial, forman parte de la Fuerza de Policía de Sudáfrica. Además de las funciones de la policía ordinaria y de la Brigada Especial, en el presupuesto de Sudáfrica también se consignan fondos para "servicios secretos" dentro de las partidas correspondientes a la policía, servicios de información, y administración bantú, todos los cuales figuran entre los servicios integrados que abarcan a Sudáfrica y al Africa Sudoccidental.

Otras leyes propuestas

22. El *Emergency Planning Bill* citado en el informe anterior del Comité Especial no fue aprobado por el Parlamento de Sudáfrica durante 1965, pero tenía que volverse a presentar después de la elección de un nuevo Parlamento en 1966. Según se expuso anteriormente, dicho proyecto de ley, que caracterizaba el sabotaje como una de las contingencias que podían conducir a la declaración de un estado de emergencia, concedería a Sudáfrica amplios poderes para movilizar hombres y materiales en tiempo de emergencia. Esa ley implantaría el adiestramiento obligatorio para todos los hombres y mujeres físicamente capaces de 17 a 65 años de edad que no hubieran recibido instrucción militar y no estuvieran incluidos dentro de ciertas categorías de la administración pública, para hacer frente a emergencias nacionales.

23. Otro proyecto de ley que debe examinarse durante 1966, el *Suppression of Communism Further Amendment Bill*, excluirá a toda persona fichada o condenada en virtud de la ley principal del ejercicio de la profesión de abogado, procurador, notario o registrador de la propiedad.

Deportación de dirigentes políticos del Africa Sudoccidental

24. *The Windhoek Advertiser* informó el 22 de marzo de 1966 que el Sr. Sam Nujoma, Presidente de la South West Africa People's Organization (SWAPO), y otro funcionario de dicha organización que no fue identificado, habían desembarcado en el aeropuerto internacional de Windhoek el 20 de marzo. La información declara que, tras haber sido detenidos en el aeropuerto por la policía de seguridad, fueron acompañados de nuevo el día siguiente, 21 de marzo, al avión que habían fletado y se les ordenó que abandonasen el Territorio. Se afirma que aterrizaron en Livingstone y que se esperaba que llegasen a Lusaka el 22 de marzo, de paso hacia Dar es Salaam.

25. Hay que señalar que en el Africa Sudoccidental se considera que la deportación de los naturales del Territorio bajo mandato excede a la autoridad jurídica del Estado. En este sentido, cabe señalar el siguiente

fragmento del fallo del Tribunal Supremo del Africa Sudoccidental en el caso de R. contra Skrywer⁶:

"De acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional, los Estados están facultados para expulsar en cualquier momento a los extranjeros que hayan sido admitidos en su territorio... Como corolario de este principio, el derecho internacional no autoriza a un Estado a expulsar a sus propios súbditos."

Incidente en Ovambolandia

26. De conformidad con otra comunicación que publicó *The Windhoek Advertiser* el 17 de marzo de 1966, un oficial de la SWAPO envió el 16 de marzo un telegrama dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas⁷, que decía lo siguiente:

"El dirigente de la SWAPO, Leo Shoopala, ha sido fusilado por el Jefe Jacob Ashipala de Ovambolandia, del Gobierno sudafricano. Fedelis Ijabo gravemente herido. Situación en Ovambolandia muy tirante."

27. *The Windhoek Advertiser* reprodujo la declaración siguiente relativa a la situación que, por lo visto, fue publicada por el Departamento de Información del Estado:

"La policía sudafricana está investigando un tiroteo ocurrido en Ovambolandia.

"Según la información de que se dispone, murió un bantú a consecuencia de un disparo hecho por un jefe ovambo y otro bandú fue ligeramente herido.

"La situación en esa zona es desde luego tirante."

28. Según comunicó *The Windhoek Advertiser* no se pudo obtener más información por medio del Departamento.

Elecciones generales

29. El 30 de marzo de 1966 se celebraron elecciones generales en el Africa Sudoccidental, para elegir a seis miembros del Territorio para el Parlamento sudafricano y 18 miembros para la Asamblea Legislativa territorial. El derecho de sufragio está limitado en el Territorio a los europeos que han cumplido 18 años de edad o más. El 15 de septiembre de 1965, había 37.264 votantes inscritos en el Territorio.

30. El Nationalist Party está afiliado al partido que está en el poder en Sudáfrica, y el United National South West Party, que no está afiliado al partido de la oposición de Sudáfrica, se disputaron todos los puestos. Los candidatos del Nationalist Party obtuvieron todos los puestos en ambas cámaras. El jefe del United National South West Party, el abogado J. P. Niehaus, que fue el único miembro de la oposición de la Asamblea Legislativa del Africa Sudoccidental, perdió su puesto.

31. Los resultados oficiosos de la elección dieron 21.380 votos para los candidatos del Nationalist Party y 9.808 para los candidatos del United National South West Party para los seis puestos del Parlamento. Los resultados de las elecciones de la Asamblea Legislativa dieron un total de 21.240 votos para los candidatos del

Nationalist Party contra 10.187 para los candidatos del partido de la oposición, en comparación con 19.360 votos para los candidatos del Nationalist Party y 13.216 para sus opositores en las elecciones generales para la Asamblea Legislativa territorial que se celebraron en 1961.

32. Se celebró anteriormente la elección y nombramiento de los cuatro senadores del Africa Sudoccidental, cuyo mandato para el Senado Sudafricano dura cinco años. El 26 de noviembre de 1965, la Asamblea Legislativa territorial, que se reunió con miembros del Parlamento del Africa Sudoccidental, eligió a dos senadores. El Presidente del Estado designó a otros dos senadores del Africa Sudoccidental, a partir del 6 de diciembre de 1965, uno de los cuales debe ser designado "principalmente teniendo en cuenta su completo conocimiento, debido a su experiencia oficial o por otras razones, de las necesidades y los razonables deseos de las razas de color del Territorio".

Organos administrativos locales

33. En todas las zonas urbanas principales del Territorio hay órganos administrativos locales compuestos de europeos; en las zonas donde viven los indígenas hay juntas asesoras africanas. En 1965, a raíz de crearse la primera de una serie de municipios separados para personas de color, la Asamblea Legislativa autorizó al Administrador (Ordenanza No. 34 de 1965) a establecer, en cada municipio de personas de color, comités consultivos o de administración integrados por residentes de color, elegidos, designados, o en parte elegidos y en parte designados. Un comité consultivo actuaría con capacidad consultiva del órgano administrativo local europeo mientras que un comité de administración se encargaría de algunas de las funciones del órgano administrativo local europeo con respecto al municipio de personas de color. La Ordenanza contiene disposiciones que rigen la posible creación de órganos administrativos locales separados para los municipios de personas de color.

Otros acontecimientos políticos

34. En 1965 se publicaron anónimamente una serie de folletos en que se atacaba a la SWAPO, a la South West Africa National Union (SWANU) y a la National Unity Democratic Organization (NUDO) y se apoyaban las recomendaciones de la Comisión Odendaal; según se comunicó, dichos folletos fueron distribuidos clandestinamente en los lugares donde viven autóctonos y en las reservas de indígenas del Africa Sudoccidental.

35. En septiembre de 1965, tras una visita anterior que hicieron ese año jefes y notables del Africa Sudoccidental a diversas partes de Sudáfrica, inclusive al Transkei, el Primer Ministro de Sudáfrica aprobó una nueva visita a la República por un grupo de unos 145 maestros, sacerdotes y enfermeras de la tribu Ukuanyama de Ovambolandia.

36. Se recordará que, por carta del 1º de diciembre de 1965 dirigida al Presidente de la Cuarta Comisión⁸, el Reverendo Markus Kooper y los Sres. Mburumba Kerina y Nathanael Mbaeva anunciaron la formación de una nueva organización, la South West Africa Na-

⁶ R. contra Skrywer (Africa Sudoccidental), 1957; magistrados: J. P. Claassen y J. Hofmeyr. En este caso figuraba un africano nacido en el *Gebiet* de Rehoboth.

⁷ No se ha recibido en las Naciones Unidas.

⁸ A/C.4/660.

tional United Front (SWANUF). En una petición de fecha 11 de febrero de 1966 (A/AC.109/PET. 474), el Sr. Kerina comunicó al Comité Especial que la NUDO, la SWANU, la South West Africa United National Independence Organization (SWAUNIO) y la South West Africa Workers Union (SWAWU) se habían fundido para constituir la SWANUF. Según una declaración del Consejo Exterior de la SWANU, contenida en una petición de fecha 21 de marzo de 1966 (A/AC.109/PET.457/Add.1), la SWANU no era, ni había sido nunca, un partido de la SWANUF.

Fuerzas de defensa y de policía

37. En los últimos años, las fuerzas de defensa y de policía, que actúan simultáneamente en Sudáfrica y en Africa Sudoccidental, han sido reorganizadas con el propósito de realizar operaciones conjuntas y complementarias. Se ha hecho hincapié en la movilidad, de manera que, en caso necesario, hombres y equipo puedan llegar cuanto antes a cualquier punto de Sudáfrica o Africa Sudoccidental dispuestos para entrar en acción.

38. En Africa Sudoccidental, los primeros helicópteros de la policía y unidades de perros policía entraron en servicio durante el año 1965 y principios de 1966. En dos ocasiones en 1965, el 26 de marzo y el 9 y 10 de septiembre, se realizaron ejercicios con artillería de costa, disparando en dirección al mar dentro de la distancia de seis millas náuticas en la costa de la Bahía de Walvis; en la *Gazette* territorial y en la prensa se anunciaron por anticipado ejercicios militares. En varias escuelas europeas se realizaron, a lo largo del año, desfiles de inspección de cadetes. Si bien, en octubre de 1964, los cadetes de aviación de la English Medium High School de Windhoek fueron informados por un capitán del South West Africa Command de que la finalidad de la formación de cadetes no era hacer soldados sino desarrollar cualidades directivas, de autodisciplina y *esprit de corps*, durante el año 1965 los cadetes de las diferentes escuelas escucharon a un comandante encargado de llevar a cabo inspecciones que les dijo que ellos constituían la base sobre la que se montarían las futuras escuelas militares y que les correspondía defender el país en el futuro.

Estadísticas de crímenes

39. En los últimos años se ha podido observar en el Territorio un aumento de los delitos violentos y otros delitos importantes. En el distrito de Windhoek, con una población total de 50.191 a finales de 1963 (24.450 africanos, 21.817 europeos y 3.924 personas de color), las estadísticas publicadas indican que el número de delitos graves, tales como asesinatos, violaciones, homicidios culpables y robos importantes perpetrados por europeos, personas de color y africanos ha pasado de 62 en 1962 a 92 en 1963, 116 en 1964 y 142 en 1965 antes de finales de año.

40. Durante el año 1963, un total de 5.225 personas comparecieron ante los tribunales de Windhoek. Cuatro mil cuatrocientos veintitrés personas de entre ellas fueron declaradas culpables; en esa cifra se incluyeron 183 condenas por atraco, 119 por atraco con premeditación, 246 por robo, 121 por escalo, 25 por robo de ganado, 125 por entrada indebida y seis por robo. Se supone que la gran mayoría de los otros casos constituían infracciones de la legislación de permisos. En 1964, los tribunales de Windhoek conocieron 8.519 casos, y

durante 1965, antes de finales de año, consideraron un total de 11.335 casos.

41. En el otro distrito para el que se dispone de estadísticas recientes, el distrito de Okahandja, que tenía una población de 10.000 no blancos y 2.193 blancos, según la información publicada el 9 de febrero de 1965, el número de casos criminales pasó de 834 en 1964 a 1.047 para todo el año 1965. El número de delitos graves pasó de 9 en 1964 a 15 en 1965.

Friends of Rhodesia Fund

42. En febrero de 1966, los hombres de negocios, los profesionales y los agricultores europeos de Africa Sudoccidental formaron una rama de la organización "Friends of Rhodesia" para recaudar donaciones que luego serían enviadas a la organización central existente en Transvaal, en donde se compraba gasolina para ser enviada a Rhodesia. En la prensa local se publicaron formularios de autorizaciones de pago, que las personas podían enviar a sus bancos autorizando los giros mensuales contra sus cuentas y a favor del "Friends of Rhodesia Fund S.W.A." hasta nueva orden.

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión Odendaal

43. Durante todo el año 1965 y principio de 1966, el Gobierno de Sudáfrica y la Administración del Africa Sudoccidental actuaron con rapidez para crear la infraestructura considerada necesaria para establecer los "territorios patrios" de Africa Sudoccidental. Se recordará que el Gobierno aplazó una decisión sobre el establecimiento real de los propuestos "territorios patrios" hasta conocer el fallo de la Corte Internacional y adquirir por lo menos la mayor parte de las explotaciones agrícolas europeas destinadas a esos "territorios patrios".

44. Al 25 de octubre de 1965, se habían gastado más de 18 millones de rand⁹ en la compra de más de 315 explotaciones agrícolas y el Gobierno pensaba completar dicho programa de compras en los próximos meses. Muchos de los granjeros europeos han decidido permanecer en sus granjas después de venderlas, pagando un arrendamiento a la Administración. Se dice que las ventas, ocurridas durante un bienio de fuertes sequías que tan sólo recientemente se ha visto aliviado por lluvias intensas, han salvado a muchos granjeros de la ruina y han contribuido apreciablemente a aumentar el costo de vida en Africa Sudoccidental.

45. En el caso de una granja de propiedad de un europeo en el *Gebiet* de Rehoboth Baster, uno de los propuestos "territorios patrios no blancos", el propietario pidió 750.000 rand; la Administración ofreció 508.000 y más tarde retiró su oferta. La Administración hizo una declaración explicando que se había notificado a los propietarios de la granja que, habida cuenta de que la compra en virtud del Plan Odendaal todavía se realizaba con carácter voluntario, podían continuar sus actividades agrícolas hasta que se hiciese necesaria la adquisición de la tierra. La granja en cuestión quedaría encuadrada en la definición gubernamental de "zona blanca", lo que significa tierra de propiedad de europeos dentro de una zona destinada para otro grupo.

⁹ Un rand = 10 chelines.

46. La política y la práctica del Gobierno sudafricano en esta situación se refleja en el siguiente extracto de un informe oficial del Department of Bantu Administration and Development para el período 1960-1962, publicado en febrero de 1965:

"La preparación de "zonas negras" y "zonas blancas" constituye una faceta de la más amplia política de creación de territorios patrios bantúes. Para conseguir este objetivo se necesita la cooperación de todos, dado que no siempre es posible adquirir la tierra adecuada lindante con zonas de bantustanes para la reagrupación étnica. Sólo en última instancia se recurre a la expropiación."

47. De realizarse en Africa Sudoccidental el Plan Odendaal para la creación de "territorios patrios" separados para no blancos y de una "zona blanca" hay que suponer que la política general del Gobierno, tal y como se describe en el informe del Department of Bantu Administration and Development para el período 1960-1962, se convertirá en ley, como ocurrió con las llamadas "zonas blancas" de Sudáfrica:

"La política general mantenida con respecto a los bantúes en las zonas blancas (y viceversa) fue explicada por el entonces Minister of Native Affairs, Dr. H. F. Verwoerd — ahora Primer Ministro —, en el siguiente discurso:

"En estas zonas (es decir, los bantustanes o reservas) el blanco no tiene derecho a ninguna propiedad ni es sujeto de determinados derechos civiles: no es más que un habitante temporal que ayuda al desarrollo de las zonas que, sin embargo, siguen siendo territorios bantúes y en donde los derechos de los bantúes están garantizados. En estas zonas los blancos no tienen derechos permanentes de ningún tipo. Pero en las zonas blancas ocurre exactamente lo contrario. En éstas los blancos tienen su legítimo hogar y aquí el bantú es el habitante temporal y el visitante, cualquiera que sea la razón de su presencia... la zona residencial bantú cercana a la ciudad constituye sólo una parte de la zona de los blancos que se facilita como residencia temporal a los que trabajan para los blancos y se ganan en ella su vida."

48. Se recordará que la así llamada "zona blanca" de Africa Sudoccidental tendrá una mayoría de población no blanca. La clasificación gubernamental de una zona multirracial como "zona blanca" refleja la distribución de derechos y no la composición real de la población.

Situación económica y proyectos de desarrollo

49. De un 80% a un 90% de la producción de Africa Sudoccidental, que consiste principalmente en minerales, productos pesqueros, pieles de caracul y ganadería, está destinado a la exportación.

50. El valor de las exportaciones de minerales ascendió en 1964 a una nueva cifra máxima de más de 93 millones de rand, de los cuales 60.200.000 rand correspondieron a la venta de diamantes y casi 32 millones de rand a la exportación de minerales comunes de la Tsumeb Corporation. Los beneficios de la Consolidated Diamond Mines (CDM), filial de la De Beers Consolidated Mines, se elevaron en 1964 a un máximo de más de 33.300.000 rand, después de deducidos más de 17.900.000 rand por concepto de impuestos. La CDM calculó que sus beneficios para 1965 alcanzarían un nuevo máximo de 39.700.000 rand, después de pa-

gar impuestos por valor de 24.800.000 rand. Durante los ocho primeros meses del año, la CDM produjo un promedio de 115.000 quilates por mes. En septiembre de 1965 se inauguró una nueva planta de separación de medios pesados con la que se esperaba que aumentase la producción en 10.000 quilates por mes. La nueva planta, que funciona solamente con turno de día, tiene una capacidad doble que la antigua, que funcionaba 24 horas al día. Durante 1965, la De Beers Consolidated Mines, que tenía inversiones directas o indirectas en las distintas empresas de minería submarina, consiguió el control de la Marine Diamond Corporation que operaba a lo largo de la costa meridional del Territorio. Los beneficios netos de la Tsumeb Corporation, que compró su propiedad por cerca de 2 millones de rand al terminar la segunda guerra mundial, se elevaron a 7.600.000 rand en 1964, después de deducidos casi 3.500.000 rand por concepto de impuestos, en comparación con un beneficio neto de 5.200.000 rand, después del pago de impuestos por valor únicamente de 14.930 rand en 1963, cuando se permitió a la corporación que dedujera el capital necesario para instalar una fundición.

51. La exportación de pieles de caracul, por valor de más de 15 millones de rand en 1963, se elevó, según los informes, a más de 20 millones de rand en 1964. La producción pesquera aumentó de 22.600.000 rand en 1963 a 34.300.000 rand en 1964. Según los datos estadísticos publicados en enero de 1966, la exportación de ganado vacuno bajó a 252.000 cabezas en 1964 y a 246.000 en 1965, debido en parte a las renovaciones de los mataderos sudafricanos; la exportación de reses en canal bajó de 3.822 a 192 y la exportación de ganado menor de 150.000 a 107.000 cabezas. Anteriormente el mercado de exportación de ganado vacuno y ganado menor se limitaba casi exclusivamente a Sudáfrica. Sin embargo, hacia fines de 1965, el Gobierno de Sudáfrica concedió a una fábrica de conservas de carne de Windhoek permiso para exportar 250 toneladas de cortes de carne al mes a mercados de ultramar, siempre que la carne no fuera necesaria en Sudáfrica. En diciembre de 1965, Sudáfrica empezó a comprar carne de vaca congelada en Rhodesia para compensar las pérdidas de sus propios mataderos.

52. No hay indicios todavía de venta de excedentes de ganado de las reservas indígenas del norte. Desde que se inició la administración del Territorio por Sudáfrica, se ha prohibido a los africanos de esas reservas, que constituyen la mayoría de la población del territorio y que poseen unos dos tercios del ganado propiedad de africanos en Africa Sudoccidental, que vendan el ganado fuera de sus propias zonas a causa de las enfermedades que afectan a su ganado. Durante 1965 se realizaron programas de lucha contra diversas zoonosis en las reservas del norte. El Servicio de Información de Sudáfrica comunicó en agosto de 1965 que la Bantu Investment Corporation, que ya había establecido una fábrica de muebles en Ovambolandia, "compraba ya los productos de las industrias artesanas, tales como cestos y esteras, para revenderlos en otras zonas". No hay ningún indicio de otras exportaciones de la zona.

53. Según se indicó en un informe anterior del Comité Especial, la ejecución del plan quinquenal recomendado por la Comisión Odendaal y de otros proyectos de desarrollo del Territorio se reflejó en el presupuesto de gastos correspondientes al ejercicio económico de 1964/1965. Según las cuentas ya comprobadas de los

ingresos y gastos reales correspondientes a ese año, el ingreso del Territorio se elevó a 71 millones de rand, de los cuales más de 31 millones de rand procedían del impuesto sobre la renta y de los derechos de exportación de diamantes e impuestos sobre los beneficios y 17 millones de rand representaban préstamos del Gobierno de Sudáfrica. En 1963/1964, el ingreso del Territorio se elevó a 39.600.000 rand, de los cuales 21.200.000 rand provenían del impuesto sobre la renta y de los derechos de exportación de diamantes e impuestos sobre los beneficios. El gasto durante 1964/1965 ascendió a 63.200.000 rand, incluida una asignación de más de 20.500.000 rand para el Territorial Development and Reserve Fund, en comparación con un gasto total de 33.600.000 rand en 1963/1964, del cual se habían asignado al Territorial Development and Reserve Fund 9.300.000 rand.

54. La Asamblea Legislativa del Territorio aprobó otro presupuesto máximo para el ejercicio económico 1965/1966. La Asamblea Legislativa autorizó gastos por un valor de 81.760.200 rand en 1965/1966, en comparación con una partida inicial de 71.389.600 rand en 1964/1965 y 37.200.000 rand en 1963/1964. De los gastos correspondientes a 1965/1966, más de 55 millones de rand se financiarán mediante ingresos del Territorio, 23 millones de rand habrán de proceder de un préstamo con cargo a un plan de desarrollo sudafricano y el resto se sufragará con fondos procedentes del ingreso territorial y asignados antes al Territorial Development and Reserve Fund.

55. Durante 1964/1965, se llevó a cabo en el África Sudoccidental un programa estatal de construcción por valor de 16.600.000 rand financiado con cargo al Territorial Development and Reserve Fund, que comprendía la construcción de edificios públicos, instalaciones docentes y sanitarias y servicios postales, telegráficos y de telecomunicaciones.

56. De una partida de más de 8 millones de rand aprobada para la construcción de edificios públicos, con cargo a la cual se efectuaron gastos durante el ejercicio económico, los proyectos correspondientes a las reservas indígenas representaron un total de 266.390 rand, distribuidos en la forma siguiente: 49.892 rand para un nuevo cuartel de policía en Ondangua; 200.490 rand para un nuevo cuartel de policía en Runtu; y 16.008 rand para la construcción de edificios provisionales en Runtu.

57. Durante 1964/1965 se realizó un programa de construcción de escuelas por valor de 4.769.412 rand, de los cuales 3.315.966 rand se destinaron a la construcción de escuelas para blancos, 799.534 rand a escuelas para africanos y 673.912 rand a escuelas para basters y otras poblaciones de color. Las instalaciones docentes en construcción para africanos representaban un gasto total de 185.225 rand para la construcción de nuevas escuelas en las reservas indígenas de Ovambolandia y Okavango y 119.083 rand más para otros edificios con fines docentes en Ovambolandia; 149.000 rand para escuelas y albergues en otras reservas indígenas; 45.000 rand para ampliar la escuela de Augustineum, secundaria y normal, que se va a suprimir en el futuro; y 14.836 rand para construir escuelas prefabricadas en Hoachanas, una reserva indígena clasificada oficialmente como "provisional", pero que en realidad forma parte del territorio tradicionalmente habitado por los Rooinasie Namas.

58. La construcción de escuelas para personas de color entrañó el gasto de 406.925 rand en el *Gebiet* de Rehoboth Baster, 190.625 rand para un liceo y 216.300 rand para un internado, así como 266.987 rand para escuelas de gente de color en tres zonas blancas, incluso Walvis Bay.

59. En un discurso pronunciado en septiembre de 1965 en la inauguración de una nueva escuela de formación profesional para niñas europeas en Windhoek, un miembro del Comité Ejecutivo del África Sudoccidental declaró que la Administración se proponía brindar a cada niño en el Territorio — blanco, de color o africano — "la oportunidad de gozar de la educación en la medida en que sea capaz". Refiriéndose a la construcción de nuevas escuelas, declaró que en el futuro previsible deberían gastarse 5.500.000 rand en edificios escolares para blancos, 2.250.000 para personas de color y 250.000 para africanos. Dijo que "las comparaciones son odiosas" y que la cantidad de dinero gastada en la educación de los africanos no podía compararse con la que se destinaba a la educación de los blancos. "Esa comparación no toma en cuenta la realidad", explicó, "porque se basa en otros fundamentos y otros principios".

60. En 1965, mientras se construía una ampliación provisional del Augustineum, a fin de permitir que otros 100 estudiantes ingresaran en la escuela en 1966 con lo que se alcanzaría un total de 400, se empezó a construir un nuevo Augustineum cerca de Windhoek, a comienzos del año fiscal 1965 y 1966, a un costo aproximado de 1.500.000 rand. El nuevo Augustineum Non-European Educational Centre debía quedar terminado en abril de 1967. El centro debía alojar como pupilos a 700 muchachos y muchachas de 15 años en adelante y entre sus servicios se incluiría un programa de enseñanza secundaria para obtener el título de bachiller, una escuela normal, una escuela de economía doméstica para las muchachas y un taller de formación de artesanos. Sin embargo, se informó que la escuela estaba situada dentro de un nuevo municipio para personas de color y que, si bien, en principio estaría abierta a todos los grupos no blancos, más adelante quedaría limitada a las personas de color. En marzo de 1966, la Administración anunció que el primer colegio normal para blancos había de ser proyectado y construido dentro del Territorio tan pronto como fuera posible.

61. En cuanto a la construcción de hospitales, en 1964/1965 se cambió la orientación normal de los gastos; una gran parte de los gastos autorizados se destinó a las personas no blancas, por primera vez en la historia del Mandato, a la construcción de hospitales en las reservas indígenas. De un total de 3.661.976 rand autorizados para la construcción de hospitales, 3.162.995 rand se dedicaron a los no blancos: 2.041.508 rand para el hospital de 444 camas y el equipo auxiliar, incluso una cocina eléctrica, equipo de lavandería, construcción de calles, etc., en Oshakati (conocido anteriormente como Okatana) en Ovambolandia; 712.837 rand para un nuevo hospital en Runtu, centro administrativo de la reserva indígena de Okavango, y 408.650 rand para la construcción de hospitales para no blancos en zonas urbanas blancas.

62. Las obras en construcción relacionadas con los servicios de correo, telégrafos y comunicaciones durante 1964/1965 entrañaban un gasto total autorizado de 154.604 rand, de los cuales 27.280 rand se gastarían en

una nueva oficina de correos en Runtu y el resto en las zonas urbanas blancas.

63. A fines de 1965, se informó que estaba muy avanzada la construcción de dos municipios en Oshakati y Ondangua (Ovambolandia) como parte de la ejecución del Plan Odendaal. En Oshakati se estaban construyendo residencias y otros edificios para el Comisionado General de la población indígena de Africa Sudoccidental y para otros funcionarios oficiales, y también se construía un municipio africano de 152 casas de cuatro habitaciones. En unos doce lugares de Ovambolandia se proyectaba construir también otros municipios.

64. Los trabajos hidráulicos y de construcción de carreteras continuaron en el Territorio durante todo el año 1965 y comienzos de 1966.

65. En 1965, Sudáfrica empezó a construir un aeropuerto para aviones a chorro en la Franja del Caprivi Oriental, una reserva indígena lindera con Angola, Zambia, Rhodesia del Sur y Bechuania. La Comisión Odendaal había recomendado que el aeropuerto existente en Katima Mulilo, al que describió como apropiado para aeronaves más ligeras, fuera transformado en uno de los 16 aeropuertos principales propuestos para uso de los grandes aviones en servicios ordinarios y para los vuelos de pasajeros y de carga. El aeropuerto de Katima Mulilo fue construido por WENELA, una organización sudafricana encargada de contratar trabajadores. Tiene una pista de aterrizaje de 6.000 pies de longitud, la más larga de Sudáfrica antes de terminada la pista de tarmac de 9.000 pies en el nuevo aeropuerto internacional situado en las afuerzas de Windhoek. El aeropuerto de Katima Mulilo está situado a dos millas al sudeste de la ciudad del mismo nombre, centro administrativo de la Franja del Caprivi Oriental. Se informa que el nuevo aeropuerto está situado en Mpacha, a unas 15 millas de Katima Mulilo.

66. El Presidente de Zambia ha afirmado que el aeropuerto que se construye en Mpacha es una base aérea militar y ha prevenido de que cualquier empresa de Zambia que suministre materiales para la construcción del aeropuerto será severamente castigada. En octubre y noviembre de 1965, el Presidente de Zambia, así como el representante de la SWAPO en Zambia (A/AC.109/PET.434), declararon que había aviones de caza en el nuevo aeropuerto. Los portavoces del Gobierno sudafricano han negado que el nuevo aeropuerto sea una base militar. El Ministro de Transportes de Sudáfrica ha explicado que se construye un aeropuerto con pistas pavimentadas en Katima Mulilo para facilitar en caso de emergencia los aterrizajes de la South African Airways en sus servicios de ultramar y para mantener los contactos por medio de la aviación civil entre la República y sus centros administrativos en la región, en las épocas en que los caminos de la Franja de Caprivi se tornan intrasitables.

67. Hasta ahora, el aeropuerto construido por WENELA ha sido utilizado con el segundo de esos fines. Entre los servicios de la South African Airways a Europa con aviones a reacción figura un vuelo semanal con escalas en Windhoek, Luanda y Las Palmas. La empresa ofrece servicios más frecuentes a Europa en los vuelos que, partiendo de Johannesburg, hacen escala en Luanda (1.344 millas náuticas) y luego en Las Palmas (3.238 millas náuticas) antes de seguir a Europa.

68. En diversos centros de la Zona de Policía se construyen también otros aeropuertos. Por ejemplo, en

Ruacana, emplazamiento de la futura central hidroeléctrica de Kuene y en las reservas indígenas de Ovambolandia y Okavango, situadas en la frontera septentrional de Africa Sudoccidental.

C. EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL COMITÉ ESPECIAL¹⁰

Introducción

69. El Comité Especial examinó la cuestión del Africa Sudoccidental en sus sesiones 395a., 396a. y 398a., celebradas en Nueva York el 11, 16 y 22 de marzo de 1966, así como en sus sesiones 417a., 418a., 420a., 433a. a 435a., 437a. a 439a. y 455a., celebradas en Africa entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 1966.

70. En su 396a. sesión el Comité Especial decidió sin objeciones aceptar una invitación que se le había hecho para que enviase observadores a una conferencia internacional sobre el Africa Sudoccidental que se celebraría en Oxford, Inglaterra, del 23 al 26 de marzo de 1966. En su 398a. sesión, el Comité Especial decidió que la delegación de observadores que se enviaría a la conferencia estuviese integrada por el Sr. Gershon Collier, Sierra Leona, Presidente del Comité Especial, y el Sr. Hans Tabor, Dinamarca.

71. En su examen subsiguiente de la cuestión del Africa Sudoccidental, el Comité Especial tuvo ante sí el informe de la delegación enviada por él a la Conferencia Internacional sobre el Africa Sudoccidental (A/AC.109/L.290).

72. El Comité Especial tomó también en cuenta las comunicaciones procedentes de 49 Estados a las que se alude en el informe rendido por el Secretario General a la Asamblea General (A/6332) sobre la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General y en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución 2074 (XX) de la Asamblea.

Peticiones escritas y audiencia de peticionarios

73. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones escritas relativas al Africa Sudoccidental:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Sr. Jackson Kambode, Secretario de Trabajo, y Sr. Lucas Pohamba, representante en Zambia de la South West Africa People's Organization (SWAPO).	A/AC.109/PET.434
Sr. John G. Jaotto, Secretario General Interino de la SWAPO ..	A/AC.109/PET.434/Add.1 y 4
Sr. Mueshihange, representante de la SWAPO en Dar es Salaam	A/AC.109/PET.434/Add.2
Sr. Edward Katjivena, representante principal de la SWAPO en Argel	A/AC.109/PET.434/Add.5 ¹¹

¹⁰ Véase asimismo en el capítulo II la descripción de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, del 22 de junio de 1966 (A/AC.109/188); esta resolución trata de la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo que respecta a los Territorios coloniales considerados por el Comité Especial durante sus reuniones en Africa (1966).

¹¹ Esta petición fue distribuida después de que el Comité Especial aprobara una resolución relativa a la cuestión del Africa Sudoccidental en su 439a. sesión celebrada el 9 de junio de 1966.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Jefe Hosea Kutako, Dirigente Nacional de la National Unity Democratic Organization (NUDO)	A/AC.109/PET.450 y Add.1
Sr. Gerard Esperet, Vicepresidente de la Confédération française démocratique du travail	A/AC.109/PET.451
Sr. Duma Nokwe, Secretario General del African National Congress of South Africa (ANC)	A/AC.109/PET.452
Sr. Zedekia Ngavirue, Secretario de Coordinación y Presidente del Consejo Exterior de la South West Africa National Union (SWANU)	A/AC.109/PET.457/Add.1
Sr. Themban Munangwane	A/AC.109/PET.473
Sr. Mburumba Kerina, Secretario de Coordinación, y Sr. Nathanael Mbaeva, Secretario de Finanzas del South West Africa National United Front (SWANUF)	A/AC.109/PET.474
Sr. Brendam K. Sumbwaye	A/AC.109/PET.483

74. El Comité Especial oyó a los siguientes peticionarios respecto al Africa Sudoccidental:

Sr. Sam Nujoma, Presidente; Sr. Solomon Mifima, representante principal en Zambia, y Sr. Peter Nanyemba, representante jefe en Tanzania, de la South West Africa People's Organization (SWAPO) (A/AC.109/PET.434/Add.3)	(417a. sesión)
Sr. Andries Booys, representante principal, y Sr. Claudius Kandy, de la South West Africa National Union (SWANU) (A/AC.109/PET.457)	(418a. sesión)
Sr. Moses Smith, del Pan-Africanist Congress of South Africa (PAC) (A/AC.109/PET.484)	(438a. sesión)

75. El Sr. Nujoma, hablando en nombre de la SWAPO, dijo que el régimen fascista de Sudáfrica había intensificado sus brutales medidas de represión contra la población indígena de Namibia, conocida también con el nombre de Africa Sudoccidental. Se había sabido recientemente que el 11 de marzo de 1966 el secretario regional encargado de la organización de la SWAPO en Ukuambi, en la región septentrional, había sido muerto a tiros por un tal Jacob Ashipala, subjefe de la región nombrado por el Gobierno; y que el Sr. F. Ijambo, otro prominente miembro de la SWAPO, había resultado gravemente herido de un disparo hecho por Lukas Utoni, que también trabajaba para el Gobierno. Un tercer miembro de la SWAPO, el Sr. Kashumua Nembija, había sido detenido el 31 de marzo por el llamado Comisionado de Asuntos Bantúes de Ondangua, y acusado de llevar puestas ropas que habían sido usadas por un asesino en Angola. Aunque no había estado en Angola ni sabía nada del caso, fue golpeado por la policía y detenido. Fue golpeado otra

vez, y el 3 de abril de 1966 se le halló muerto de resultas de las lesiones recibidas.

76. Se había descubierto que esos asesinatos habían sido organizados secretamente por la policía de Sudáfrica. Cuando ocurrieron los tiroteos de Ukuambi, un fuerte contingente de policía armada procedente de Tsumeb y Otjiwarongo fue enviado apresuradamente a la escena de los disturbios con objeto de proteger a los titeres del Gobierno. El Comisionado de Asuntos Bantúes anunció públicamente que el Gobierno facilitaría más armas y municiones para que continuaran la represión y la matanza del pueblo de la región.

77. En violación del Mandato en virtud del cual el régimen racista de Sudáfrica administraba el Africa Sudoccidental, se habían establecido bases militares en el país; la más importante se encontraba en Walvis Bay, principal puerto marítimo del país. Existía un campamento de instrucción militar en Windhoek, la capital, y recientemente se había construido una enorme base aérea en Singalamwe, en el Caprivi Zipfel Oriental, a sólo 15 millas de la frontera entre Zambia y Namibia. Equipo militar por valor de 25 millones de libras, incluso cañones y artillería pesada, había sido introducido en la base aérea de Caprivi, desde Sudáfrica, pasando — según se decía — por Rhodesia del Sur. Según sus informes, tanques pesados como los que se emplearon durante la segunda guerra mundial estaban concentrados allí, y en la base aérea se encontraban estacionados aviones de caza a chorro de Rhodesia del Sur. Se señaló también que la construcción de la base había sido realizada por la Lewis Construction, sociedad de Rhodesia del Sur. En todo el país se habían construido estaciones de policía que dependían del ejército sudafricano y se estaba dando instrucción en el manejo de armas automáticas a las amas de casa blancas.

78. Sudáfrica no sólo había impuesto a Namibia su despiadado sistema del apartheid, sino que también perseguía persistentemente una política de colonialismo, explotación y represión. El sistema de reclutamiento de los trabajadores africanos venidos de las llamadas reservas indígenas situadas fuera de la Zona de Policía era un peligro para el bienestar y el crecimiento futuro del país. La South West African Native Labour Association (SWANLA) — organismo patrocinado por el Gobierno y autorizado a reclutar peones para trabajar bajo contrato en las minas, las explotaciones agrícolas y otras empresas europeas — servía para imponer condiciones inhumanas a los trabajadores africanos. Los africanos estaban sujetos con frecuencia a diversas formas de presión económica directa e indirecta en sus reservas: estaban obligados a pagar un impuesto al Gobierno, y como no tenían ningún otro medio de obtener dinero, tenían que aceptar los contratos de empleo de la SWANLA, en virtud de los cuales eran reclutados por un período de 18 meses o dos años sin que se les permitiera dejar su trabajo. Los salarios de los africanos empleados en las minas ascendían a unos 5 rand por mes, mientras que el obrero blanco medio se consideraría mal pagado si recibiera alrededor de 150 rand. Se necesitaría un mínimo de 100 rand por mes para que un hombre pudiese vivir bien. El costo de la vida era elevado, el salario medio de 5 rand mensuales que se pagaba a los trabajadores africanos apenas alcanzaba para comprar alimentos, y no quedaba nada para ropa. Un par de pantalones, por ejemplo, costaba unos 10 rand, y un par de zapatos, unos 8 rand,

lo cual representaba unos meses de salario. Al expirar sus contratos, los africanos eran obligados a volver a sus reservas, de donde sólo podían salir para trabajar nuevamente mediante el mismo sistema. Sus familias no estaban autorizadas a acompañarles, y un hombre que trabajase dos años sólo podía ahorrar 30 rand al final de su contrato, cantidad máxima autorizada por el Gobierno. En el sistema de contratos no se preveían ni prestaciones por familiares a cargo ni el pago de salarios a los trabajadores enfermos. Los africanos que regresaban a sus hogares sólo podían pasar allí unos pocos días antes de volver a trabajar de nuevo en las mismas condiciones.

79. A los africanos no sólo no se los formaba como obreros calificados sino que, para impedir que se especializaran, no se les daba empleo de nuevo en una misma fábrica, y se los enviaba a una distancia de algunas millas para el trabajo siguiente, en el que continuaban siendo explotados.

80. El sistema de contratos constituía una explotación sistemática del hombre por el hombre que equivalía a la esclavitud. Las grandes compañías extranjeras que explotaban las riquezas minerales del país realizaban esta trata de esclavos; algunas de ellas, como la Consolidated Diamond Mines of South West Africa, la Tsumeb Corporation, el sindicato de industrias pesqueras y de los agricultores llegaban incluso a estar representadas en el Consejo de Administración del SWANLA para tener la seguridad de conseguir la mano de obra barata necesaria. La administración colonial sudafricana había convertido así el Territorio bajo mandato de Namibia en un paraíso del hombre blanco, basado enteramente en la mano de obra barata africana. Las compañías que explotaban a los trabajadores se repartían las ganancias después de pagar impuestos al régimen fascista. A los africanos no les tocaba ninguna parte de las ganancias. La economía estaba totalmente en manos de blancos. Proseguían las inversiones de las sociedades extranjeras, la mayoría de las cuales habían venido originalmente de Sudáfrica. Esas inversiones alentaban al régimen racista de Sudáfrica a continuar su política de opresión. El Sr. Nujoma apeló a los países interesados para que impidiesen que sus inversionistas continuaran esas actividades.

81. El Sr. Nujoma dijo que el régimen racista sudafricano era incapaz de administrar el país y de ayudarle a progresar hacia la autonomía.

82. Los africanos no tenían derecho a votar ni estaban representados de ninguna manera, ya que todos los órganos del Gobierno estaban en manos de blancos. En las oficinas del Gobierno, los africanos sólo podían trabajar de mensajeros y como personal de limpieza. El Gobierno de Sudáfrica, lejos de preparar al pueblo del país para la autonomía, lo estaba reduciendo a la esclavitud. Se descuidaba lamentablemente la educación de los africanos. Los niños africanos sólo asistían a la escuela hasta el sexto grado y el acceso a la segunda enseñanza y a las escuelas técnicas estaba totalmente cerrado a los africanos. Existía una escuela normal superior, pero sólo unos 250 africanos habían conseguido ingresar. En algunas partes del país no existía ninguna escuela, y la mayoría de los bantustanes carecían de hospitales y de servicios sanitarios. El Sr. Nujoma deseaba que las Naciones Unidas creasen un subcomité para que visitara el país y viera por sí mismo la situación. En una época en que los países desarrollados exploraban el espacio ultraterrestre y se preparaban a enviar

hombres a la luna, el pueblo de su país apenas tenía derecho a cruzar la calle sin un pase. El país se hallaba virtualmente aislado del resto del mundo. Se aplicaban restricciones severas a los medios de información y era imposible conseguir las publicaciones de las Naciones Unidas.

83. Aunque los países del mundo unieron sus fuerzas para oponerse al fascismo alemán durante la segunda guerra mundial, al régimen fascista de Sudáfrica se le estaba proporcionando apoyo práctico, moral y material, incluso armamentos, para ayudarle a poner en práctica su política declarada de discriminación racial y apartheid, y perpetuar la supremacía blanca y la explotación de los africanos en las condiciones más inhumanas.

84. El *Nairobi Sunday Nation* del 8 de mayo de 1966 había anunciado que aviones de caza de reacción Hunter y bombarderos Camberra de Rhodesia habían utilizado el aeropuerto sudafricano de la Franja del Caprivi, que aviones de reacción de la fuerza aérea de Rhodesia habían estado utilizando Lourenço Marques como punto de reaprovisionamiento y que Rhodesia había negociado un acuerdo aéreo con Portugal y Sudáfrica para darles preferencia en caso de intervención armada directa. Según el artículo, se había establecido un enlace militar directo entre Rhodesia, Sudáfrica y Mozambique a lo largo de las 700 millas de frontera con Zambia que compartían los tres países.

85. Ese artículo revelaba la existencia de un pacto militar entre los regímenes fascistas de Salazar, Verwoerd y Smith para mantener la supremacía blanca y continuar la represión y la explotación de las masas africanas en Africa meridional. Las instalaciones militares y la acumulación de material bélico en Namibia por esos regímenes constituía una amenaza a la paz y a la seguridad, no sólo de los pueblos de Namibia y de Africa, sino de todo el mundo. Aprovechaban ese período antes que la Corte Internacional de Justicia dictase su fallo para acelerar la acumulación de efectivos militares exactamente como Hitler en los primeros años de la década de 1930. Era una maniobra deliberada cuyo objeto era la matanza en masa del pueblo africano de Namibia y la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Odendaal, que fueron totalmente rechazadas por la mayoría africana.

86. La Comisión había recomendado la división del país en grupos tribales, los llamados "bantustanes" o "territorios patrios" que recordaban los campos de concentración nazis y de los cuales sólo se permitiría salir a los africanos para trabajar como mano de obra barata y esclava en explotaciones agrícolas y minas en beneficio de los colonos blancos. La organización del señor Nujoma resistía enérgicamente la política de los bantustanes. El Sr. Nujoma recordó que el 10 y 11 de diciembre de 1959 la policía de Sudáfrica abrió fuego y mató a doce africanos que habían resistido cuando se los quiso evacuar de la zona donde vivían. Esa resistencia había continuado entre la población africana, la mayoría de la cual seguía viviendo allí. Su pueblo estaba resuelto a continuar la lucha hasta el fin, y a pelear hasta el último hombre, con palos y piedras si fuese necesario, contra sus opresores armados de pie a cabeza.

87. La SWAPO condenaba enérgicamente las atrocidades cometidas por la administración colonial de Verwoerd. También deseaba que se hiciera constar su enérgica protesta contra las medidas unilaterales adoptadas por los regímenes de Portugal, Rhodesia del Sur

y Sudáfrica para utilizar a Namibia como una especie de arsenal de material bélico y demandaba que las Naciones Unidas o alguna otra organización internacional competente realizase una investigación sobre el terreno para descubrir exactamente qué clase de armamentos habían sido instalados. El Sr. Nujoma dijo que en Sudáfrica se desarrollaba la producción de gases venenosos, y que no tenía información al respecto en cuanto al África Sudoccidental, pero que el pueblo del África Sudoccidental temía que algún día, cuando se alzase contra el régimen, se utilizaran gases venenosos contra él.

88. La condena a cadena perpetua impuesta el 9 de mayo de 1966 al Sr. Bram Fischer había demostrado al mundo que la política de apartheid era similar a la política fascista de Hitler en Europa en vísperas de la segunda guerra mundial.

89. Después de la matanza de Sharpeville en 1960, la economía de Sudáfrica había estado en una situación de pánico. Sus disponibilidades de oro y divisas descendieron por debajo del nivel peligroso de 280 millones de dólares fijado por sus banqueros hasta la cifra críticamente baja de 216 millones de dólares, y la crisis sólo pudo evitarse con la ayuda de poderosos intereses financieros de países como los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

90. La historia del colonialismo británico mostraba claramente que el Gobierno británico concedió deliberadamente la independencia a la minoría de colonos blancos de Sudáfrica en 1910, sabiendo perfectamente que el país pertenecía a los africanos; y fue el Gobierno británico quien transfirió el mandato sobre el África Sudoccidental al régimen racista de Sudáfrica. También fue ese Gobierno quien alentó al régimen rebelde de Ian Smith en Zimbabwe (Rhodesia del Sur) a perseguir sus objetivos colonialistas y continuar oprimiendo y explotando al pueblo africano. La renuencia del Gobierno laborista del Reino Unido a adoptar medidas positivas en contra del régimen rebelde de Rhodesia del Sur había demostrado al mundo que el Primer Ministro Wilson seguía soñando con ese imperio británico que estaba desapareciendo. Ese Gobierno había demostrado ser indudablemente el enemigo número uno de África. Mientras pretendía apoyar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, el Reino Unido era en realidad el inversionista más grande de Sudáfrica, donde sus capitales ascendían a mil millones de libras esterlinas.

91. El 6 de noviembre de 1962 la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado su histórica resolución 1761 (XVII) por la que pedía a los Estados Miembros que rompieran las relaciones diplomáticas y económicas con Sudáfrica, cesaran de suministrarle armas y no mantuvieran más comunicaciones con ella. Las Naciones Unidas habían aprobado esta resolución con el fin de resolver la situación de Sudáfrica por medios pacíficos. Sin embargo, muchos Estados Miembros continuaban suministrando armas y municiones al régimen minoritario blanco de Sudáfrica.

92. El 7 de abril de 1965 *Le Monde* había informado que, a su llegada a Johannesburg, el Sr. Raymond Schmittlein, Vicepresidente de la Asamblea Nacional Francesa y presidente del grupo parlamentario Francia-Sudáfrica, declaró que Francia continuaría vendiendo armas a Sudáfrica y mejoraría sus relaciones culturales y comerciales con ese país. El *Tanzania*

Standard del 14 de mayo de 1966 informaba que Sudáfrica había adquirido 16 helicópteros franceses Super-Frelon por una suma calculada en 10 millones de libras esterlinas. El periódico sudafricano progubernamental *Die Vaderland* había informado también que el Gobierno francés había prometido suministrar submarinos en 1970 al Gobierno de Verwoerd.

93. *The New York Times* del día 25 de marzo de 1966 había publicado la siguiente información:

“Mientras las actividades militares de Portugal se concentran principalmente en África, en lo que el profesor Salazar califica de campaña triunfal contra los terroristas, sus lazos defensivos en Europa están ahora exclusivamente sobre una base bilateral con Alemania, Francia y España. La próxima visita a este país del Ministro de Relaciones Exteriores alemán Gerhard Schroeder puede conducir a la ampliación de los acuerdos según los cuales se está construyendo en Beja, en el sur de Portugal, una base alemana para aviones de reacción dotada de las instalaciones necesarias. A cambio de esas instalaciones Alemania facilitará a Portugal aviones de combate de retropropulsión para las operaciones en África. Francia, que vende a Portugal helicópteros Alouette utilizados en África y que está construyendo fragatas para este país, ha recibido permiso para instalar una estación de seguimiento de proyectiles-cohetes en las Azores. Esta semana realizaron una visita a Francia el Ministro de Defensa de Portugal y Jefe del Estado Mayor del Ejército.”

94. El *Tanzania Standard* del 12 de mayo de 1966 había dicho lo siguiente:

“El ex Ministro de Defensa de Alemania occidental, Sr. Franz Joseph Straus, dijo que no había confrontación entre blancos y negros. El apartheid presentaba ciertamente aspectos que se prestan a críticas severas, pero sería equivocado hablar de opresión y de explotación de los africanos. Las medidas adoptadas por los blancos para el progreso económico de los africanos habían tenido un éxito impresionante... dijo el Sr. Straus.”

95. Entretanto se había sabido que el ex Ministro de Defensa de Alemania occidental visitaba Sudáfrica invitado por la South African Foundation, organismo patrocinado por el Gobierno que tenía oficinas en la mayoría de las capitales europeas y cuyo principal propósito era hacer propaganda, predicar el evangelio del apartheid e invitar a los europeos a emigrar a Sudáfrica y Namibia.

96. La afluencia de inmigrantes blancos en gran número constituía un peligro para el futuro del país. Namibia sólo contaba con una reducida población africana y el régimen de Verwoerd tenía la intención de acelerar la entrada de inmigrantes europeos de manera que, cuando se aplicase el principio de un voto por persona, los colonos blancos se apoderaran automáticamente del poder y dominasen para siempre a los africanos. La South African Foundation contribuía a sufragar el costo de los pasajes aéreos de los inmigrantes que iban a Sudáfrica, de donde se los trasladaba al África Sudoccidental. A menos que las Naciones Unidas interviniesen, era probable que el África Sudoccidental se convirtiera en un país completamente blanco.

97. La trata de esclavos estaba prohibida en el plano internacional, pero el trabajo forzado equivalente a la esclavitud seguía existiendo en África meridional,

donde se reclutaban africanos procedentes de Mozambique, Angola, Namibia, Bechuania y Rhodesia del Sur para trabajar en las minas de oro en condiciones horribles.

98. Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a fines del año 1962 algunas compañías norteamericanas habían invertido 353 millones de dólares en empresas controladas por ellas en Sudáfrica. En el *Financial Year Book of Southern Africa* de 1962 figuraba un norteamericano, el Sr. Engelhard, como director de las dos organizaciones que reclutaban trabajadores negros para las minas de oro sudafricanas: la Recruiting Corporation y la Witwatersrand Native Labour Association. Esas oficinas de reclutamiento de mano de obra trajeron centenares de miles de africanos de Mozambique, Angola, Bechuania, Namibia y Rhodesia del Sur. El Sr. Engelhard también figuraba en el anuario como Director de la Cámara de Minas, la cual fijaba los salarios y condiciones de trabajo de los africanos en la industria minera y se reunía una vez por mes para coordinar las actividades de las principales sociedades financieras y explotadoras de minas de oro en sus tratos con las compañías reclutadoras de mano de obra y con el Gobierno. El Sr. Engelhard era director de la compañía que controlaba el famoso imperio de minerales y diamantes de Sudáfrica de Harry Oppenheimer, cuyos beneficios — antes de deducir los impuestos — habían sido calculados en unos 330 millones de dólares. Engelhard, que no era sino uno de entre los muchos norteamericanos que aprovechaban tanto como los blancos de Sudáfrica la mano de obra negra barata que hacía posible el apartheid, había anunciado que en 1964 los beneficios de su compañía habían alcanzado la cifra record de casi tres millones de dólares, y había declarado lo siguiente:

“Creo que ese progreso (en Sudáfrica) continuará si el resto del mundo muestra comprensión por los problemas existentes. Las informaciones inexactas, ya emanen de fuentes bien intencionadas o de otras partes sólo logran agravar las dificultades y hacer el juego a los partidarios del comunismo.”

99. En enero de 1965, la Norton Company de Worcester, Massachusetts, había inaugurado una nueva fábrica de abrasivos cerca de Johannesburgo. El Presidente de la Compañía, Sr. Milton P. Higgins, había declarado: “Creo que Sudáfrica va a seguir siendo un país fuerte dirigido por blancos. Creo que los países extranjeros debieran dejar en paz a Sudáfrica. Si les dejan en paz, ustedes seguirán adelante y realizarán una gran obra.”

100. En febrero de 1965, el Sr. J. H. Fulford, Presidente de la Jeffrey Company de Ohio, había dicho, al inaugurar una nueva fábrica en Germiston: “Tenemos entera fe en la firmeza de la economía sudafricana, plena confianza en la estabilidad de este país y sabemos que las importantes inversiones que hemos hecho en el pasado y las nuevas que estamos haciendo se encuentran todas en buenas manos.”

101. El 20 de marzo de 1965, el General Norstad, ex Comandante Supremo de la OTAN y actualmente Presidente del Atlantic Council de los Estados Unidos y Presidente de la Owens-Corning Fiberglas Corporation, se había dirigido por vía aérea a Johannesburgo para negociar nuevas inversiones y había anunciado: “Tenemos plena confianza en Sudáfrica, y no sólo hablo por nosotros, sino también por los Estados Unidos y el pueblo norteamericano”. El Presidente de la

Owens-Corning Fiberglas Corporation, Sr. Harold Boeschstein, que acompañaba al General Norstad, había añadido: “Las tentativas de boicot no reflejan la opinión general de los Estados Unidos ni de sus hombres de negocios, ya que todos apreciamos mucho la importancia de Sudáfrica como aliado y como fuerza económica en el mundo libre”.

102. Un norteamericano, importante inversionista con capitales en Sudáfrica y Namibia, el Sr. N. G. Banghard, Vicepresidente de la Newmont Mining Corporation, compañía que, asociada a la American Metal Climax, explotaba una mina de cobre en Tsumeb, Namibia, había dicho en 1962: “Conocemos al pueblo y al Gobierno (de Sudáfrica) y respaldamos nuestra convicción con nuestra reputación y nuestros dólares”.

103. Aun cuando la SWAPO agradecía las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, que había prohibido la exportación de armas y municiones a Sudáfrica, había advertido sin embargo que un número apreciable de hombres de negocios norteamericanos prestaban intensa ayuda económica al régimen de Verwoerd ayudándole a conseguir sus objetivos de explotación y opresión de los pueblos africanos de Sudáfrica y Namibia. En la práctica parecía que los regímenes coloniales de Salazar, Verwoerd y Smith velaban por los intereses de los monopolios cuyas oficinas centrales se encontraban en Nueva York, Bonn, París, Londres y Washington.

104. La SWAPO apelaba a los Gobiernos de esos países para que dejaran de suministrar armas y municiones al régimen racista de Sudáfrica, pues creía que la opresión de un pueblo por otro constituía una constante amenaza a la paz y la seguridad del mundo.

105. Se había demostrado que el régimen de apartheid de Sudáfrica dominaba a Namibia por la fuerza bruta y había faltado totalmente a la obligación de fomentar el bienestar material y moral y el progreso de la población indígena hacia la libre determinación y la independencia nacional. La SWAPO rogaba por lo tanto a las Naciones Unidas que adoptasen medidas positivas contra la administración colonial sudafricana. El señor Nujoma dijo que el Gobierno había ido muy lejos para dar marcha atrás. Estaba dispuesto a continuar su política de represión y hasta pensaba en anexionar el África Sudoccidental para entregarla a la minoría blanca. Era bien sabido que el Gobierno sudafricano se había negado a permitir una presencia de las Naciones Unidas en el Territorio. La SWAPO pedía que se pusiese fin al mandato y se concediera inmediatamente la independencia. Las Naciones Unidas habían aprobado muchas resoluciones, ninguna de las cuales había sido aplicada. En caso necesario deberían enviar una fuerza de policía para liberar al país del régimen racista.

106. Contestando preguntas relativas a su organización, el Sr. Nujoma explicó que la SWAPO contaba con el apoyo de sectores de la población tales como los trabajadores y los maestros. Tenía unos 100.000 miembros, la mayoría de los cuales vivían en las zonas rurales, y era el único partido político que se oponía efectivamente a Sudáfrica. La finalidad de la SWAPO era convencer al régimen corrompido que controlaba el país de que no tenía ningún porvenir, y crear una nueva sociedad en la que todos fueran iguales ante la ley. Los colonos blancos serían bien recibidos. La SWAPO era una organización panafricana que apoyaba a la OUA y se afiliaría a ella cuando el país se independizase. Dentro del África Sudoccidental, la SWAPO no estaba re-

conocida oficialmente, y sus miembros eran objeto de detenciones constantemente. A él mismo le habían detenido en el acropuerto de Windhoek el 20 de marzo de 1966; después de retenerlo toda la noche en una celda, a la mañana siguiente lo habían sacado con una escolta armada para deportarlo a Zambia. Además, el régimen del Sur subvencionaba a bandas armadas de asesinos indígenas para que acosasen a las organizaciones de oposición, y, como ya había comunicado antes al Comité, se había llegado incluso al asesinato de miembros de la SWAPO.

107. En lo referente a las relaciones entre la SWAPO y la SWANU, el Sr. Nujoma observó que su país creía en la democracia, y que correspondería al pueblo elegir entre las dos organizaciones.

108. El Sr. Booys, hablando en nombre de la South West Africa National Union (SWANU), señaló que, en vista de las declaraciones ya formuladas por diversos peticionarios en relación con la violación por Sudáfrica del mandato sobre el África Sudoccidental, él se limitaría a hacer unas breves observaciones para confirmar lo dicho por anteriores peticionarios. La población del África Sudoccidental no tenía intención de pasarse la vida formulando peticiones. Sin embargo, aunque apreciaba los enérgicos esfuerzos de los países afroasiáticos, la SWANU tenía el deber de expresar los recelos que le inspiraba el hecho de que las Naciones Unidas no hubiesen aplicado sus resoluciones sobre el África Sudoccidental.

109. Desde luego, la SWANU había recurrido repetidas veces a la comunidad internacional para que interviniese en la explosiva situación que reinaba en el África Sudoccidental, o al menos para que las Naciones Unidas hicieran acto de presencia. Y lo había hecho porque consideraba que la comunidad internacional — a través de la Sociedad de las Naciones, de las que eran sucesoras las Naciones Unidas en virtud de una decisión de la Corte Internacional de Justicia relativa al África Sudoccidental — era responsable de la presencia de la administración de Sudáfrica en su país. La SWANU esperaba que las Naciones Unidas rectificasen esta situación. La idea del mandato como "misión sagrada de civilización" no había sido creada por la población del África Sudoccidental. Si no se consideraban justificadas sus demandas, debían decirselo, y si la comunidad internacional organizada no podía hacer nada contra el nefasto régimen de Verwoerd o no era capaz de desempeñar sus obligaciones, tampoco debía vacilar en decirlo. Si la comunidad internacional fracasaba, la SWANU no fracasaría, ya que estaba decidida a liberar el África Sudoccidental por todos los medios a su alcance.

110. Aunque se daba cuenta de que las Naciones Unidas trataban de encontrar una solución pacífica a la cuestión del África Sudoccidental, la SWANU quería advertir amistosamente que mientras el régimen de Verwoerd explotase el África Sudoccidental moral, social y económicamente, no podría haber paz en el país.

111. El régimen de Sudáfrica había recibido considerable ayuda de algunas de las grandes Potencias que eran Miembros de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad y que habían pedido que se aclarase la situación legal antes de tomar ninguna medida contra el régimen de Verwoerd. El Dr. Verwoerd había explotado plenamente tal estado de cosas y había consolidado su propia situación ocupando el África Sudoccidental y dividiendo al pueblo en grupos raciales, religiosos y tri-

bales. Mientras tanto, esas mismas grandes Potencias explotaban el país a un ritmo que, de continuar, agotaría la riqueza del África Sudoccidental en los próximos veinte años, según cálculos de las Naciones Unidas.

112. También había que tener en cuenta el problema racial, aunque el orador acogiera con gusto cualquier prueba de que dicho problema no tenía relación con la violación de los derechos humanos. Las Potencias occidentales habían intervenido cuando consideraron que las vidas de los blancos se hallaban en peligro en el Congo, pero no habían hecho nada con posterioridad a las matanzas entre la población africana de Windhoek y Sharpeville, y ahora trataban de hacer caso omiso de los acontecimientos de Zimbabwé. Sin embargo, esas mismas Potencias pagaban salarios de hambre a la población, con cargo a sus inversiones en el África Sudoccidental, y suministraban armas al régimen minoritario de Verwoerd.

113. El Sr. Booys reiteró la postura de la SWANU en relación con el África Sudoccidental. La SWANU creía firmemente en el derecho a la libre determinación de la población del África Sudoccidental y propugnaba la independencia inmediata. Este era el mensaje de la SWANU al Comité Especial.

114. En respuesta a una pregunta relativa a las relaciones entre la SWANU y la South West Africa People's Organization (SWAPO), y a la importancia numérica de su organización, el Sr. Booys manifestó que la SWANU creía en la unión con todos los movimientos inspirados en principios similares a los suyos. Actualmente, contaba con 10.000 miembros.

115. El Sr. Smith, hablando en nombre del Pan-Africanist Congress of South Africa (PAC), dijo que el Comité Especial les había concedido audiencias a él y a sus colegas en Addis Abeba en 1962 y en Dar es Salaam en 1965. Sin embargo, el orador dejaría de cumplir con su deber si no hablase otra vez en nombre del pueblo del África Sudoccidental que sufre las consecuencias de la monstruosa práctica del apartheid y que se ha comprometido a acabar con la dominación y opresión de los blancos en su Territorio.

116. La cuestión del África Sudoccidental no podía considerarse como un caso aislado, pues las funestas políticas practicadas contra ese Territorio afectaban también al pueblo de Sudáfrica. Pese a que la Asamblea General había venido examinando el caso del África Sudoccidental durante más de 15 años, y a que ese órgano y el propio Comité Especial habían aprobado muchas resoluciones al respecto, no se había modificado la actitud de los racistas sudafricanos, que se aferraban obstinadamente a su política de apartheid con la esperanza de que la cuestión llegase a un punto muerto en las Naciones Unidas. Sin embargo, el orador estimaba que si la población autóctona del África Sudoccidental proseguía su lucha implacablemente, sus esfuerzos se verían al fin coronados por el éxito. El caso del África Sudoccidental constituía un reto a la estructura y a los ideales de las Naciones Unidas. Sudáfrica había violado el mandato, que debió haber sido traspasado al Régimen de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Era evidente que sólo la fuerza haría ahora que los racistas sudafricanos cambiasen de actitud.

117. La Corte Internacional de Justicia había decidido en La Haya, en 1950, que las Naciones Unidas, Organización a la que se había traspasado la respon-

sabilidad por el Africa Sudoccidental asumida por la Sociedad de las Naciones, tenía el deber de salvaguardar el encargo sagrado de civilización manteniendo una vigilancia internacional eficaz sobre la administración del Territorio bajo mandato. El Comité Especial no debía engañarse y creer que el régimen sudafricano aceptaría cualquier fallo que le fuese contrario, a menos, desde luego, que dicho fallo fuese aplicado por la fuerza.

118. El orador no tenía el propósito de ocuparse de nuevo del martirio inhumano a que se sometía a los habitantes autóctonos del Africa Sudoccidental, punto este con respecto al cual el orador había proporcionado al Comité Especial información detallada en 1962. Sin embargo, deseaba señalar que el apartheid se practicaba en el Africa Sudoccidental con más intensidad aún que en la propia Sudáfrica.

119. El Gobierno sudafricano estaba construyendo una base aérea en la región del Caprivi del Africa Sudoccidental. Si no se ponía coto a esos preparativos militares, el Africa meridional entera se trabaaría un día en una lucha mortal de que serían responsables las Naciones Unidas y las Potencias que proporcionaban a Sudáfrica el equipo y la información técnica necesarios. Pese a que, conforme a los términos de su Mandato, Sudáfrica se había comprometido a no construir bases militares ni navales en el Africa Sudoccidental, había procedido a construirlas. Las Naciones Unidas debían, pues, tomar las medidas necesarias para privar a Sudáfrica de su Mandato. Sin que ello supusiera culpar a las Naciones Unidas, el orador consideraba hipócrita aprobar muchas resoluciones sin que fuesen acompañadas de medidas concretas. Era evidente que toda ulterior resolución, por firmes que fueran los términos en que estuviese redactada, jamás haría desistir de sus propósitos a los racistas sudafricanos. Si eso se aceptase como un hecho, no quedaría entonces otro recurso que tomar las armas. Hacía mucho tiempo que los racistas sudafricanos se venían preparando en previsión de tal posibilidad; en efecto, a principios de 1966, en vísperas de su campaña electoral, Verwoerd había exhortado al electorado blanco a no perder la calma ante el fallo de la Corte, pues se resguardarían los intereses de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental. Nada más explícito podía haber que las declaraciones de personas tales como John Naser, quien, en su carácter de Comisionado en Jefe de los Autóctonos del Africa Sudoccidental, había advertido a la población indígena que así como los africaners habían conquistado ese Territorio haciendo correr sangre, la única forma en que ésta lo reconquistaría sería también haciendo correr sangre. Con eso no se expresaba una opinión personal, sino la opinión gubernamental compartida por todos los racistas blancos del Africa meridional.

120. El apartheid no se diferenciaba del nacional-socialismo de Hitler, y la única diferencia existente entre las llamadas reservas indígenas y los campos de concentración de Hitler era su situación geográfica. Los racistas blancos sudafricanos, que hacía mucho que oprimían al pueblo autóctono del Africa Sudoccidental, estaban obsesionados ahora por visiones de venganza sin base en la realidad. Sin embargo, debían tratar de conducirse como seres humanos o un día perecerían en una revolución sangrienta.

121. Las grandes naciones del mundo tendrían que darse cuenta de que los imperios fundados en el avasallamiento y mantenidos por la fuerza se derrumba-

rían un día por su propio peso. Al final, el derecho triunfaría sobre la fuerza.

Observaciones generales de los miembros

122. El representante de Dinamarca observó que, indudablemente, la situación en el Africa Sudoccidental presentaba un cuadro sombrío. Más de 40 años habían transcurrido desde que la Sociedad de las Naciones confiara el Mandato a la Unión Sudafricana. No se había autorizado a ese país a ejercer soberanía sobre el Territorio, pero se esperaba que promoviera al máximo el bienestar material y el progreso social de sus habitantes. Era un hecho trágico que el Gobierno de Sudáfrica, lejos de cumplir sus obligaciones, hubiese mantenido al pueblo africano en una constante sujeción política y económica y hubiera hecho caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema. Su política era una violación flagrante del Mandato, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

123. No obstante, al enfocar el problema de cómo lograr una rápida terminación del Mandato debía tenerse cuidado de no rechazar a aquellos cuyo apoyo pudiera ser necesario. La Asamblea General, por supuesto, tenía competencia para cancelar el Mandato si se justificaba la alegación de que Sudáfrica lo estaba violando. Sin embargo, como la cuestión había sido llevada a la Corte Internacional de Justicia por Etiopía y Liberia, sería contrario a los principios generales de derecho que un órgano político como la Asamblea General adoptase una decisión mientras estuviera pendiente el fallo de la Corte, que se esperaba sería publicado antes de la convocación del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

124. La violación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos era tal vez aún más importante políticamente que el caso planteado a la Corte Internacional. Al aprobar la resolución de la Asamblea General que clasificaba al Africa Sudoccidental como territorio no autónomo, los Estados Miembros habían contraído la obligación moral y legal de actuar de conformidad con la resolución 1514 (XV) y de lograr la libertad del pueblo de dicho Territorio.

126. Aun en ausencia de una decisión clara de la párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta para solicitar el uso de la fuerza contra Sudáfrica, en caso de que la Corte Internacional decidiese que ese país violaba el Mandato y el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, en cuyo caso el Consejo de Seguridad podría tomar medidas. Estas medidas, no obstante, no irían suficientemente lejos: importaba lograr también la revocación del Mandato y la libre determinación para la población del Africa Sudoccidental.

126. Aun en ausencia de una decisión clara de la Corte Internacional, las Naciones Unidas debían continuar sus esfuerzos para hacer que el pueblo del Africa Sudoccidental ejerciese su derecho a la independencia. Aunque debía postergarse toda decisión sobre el enfoque práctico, a la espera de la decisión de la Corte Internacional, no había duda alguna sobre los propósitos que se debían perseguir. El Comité Especial, en sus actuales sesiones, debía limitarse a una resolución

general insistiendo sobre el derecho inalienable del pueblo a la independencia, condenando la negativa de Sudáfrica a conceder ese derecho, su negativa a permitir al pueblo africano los derechos políticos más elementales, su intento de anexar el Territorio, su política de apartheid y sus preparativos para aplicar el informe Odendaal, y debía asimismo decidir que consideraría qué recomendaciones debería dirigir a la Asamblea General inmediatamente después de la decisión de la Corte Internacional. De esa manera, el Comité evitaría proponer recomendaciones que pudieran tener que ser revisadas aun antes que llegasen a la Asamblea General. Sólo con este procedimiento por etapas podía el Comité tener la seguridad de recibir de los Estados Miembros todo el apoyo que necesitaba.

127. El representante de Dinamarca manifestó que su Gobierno y su pueblo estaban indignados ante la actitud arrogante adoptada por Sudáfrica con respecto a sus obligaciones en virtud de la Carta y a las resoluciones de los diferentes órganos de las Naciones Unidas, y deseaban cordialmente que se pusiera término a esa situación deplorable, en interés de la dignidad humana y de la paz.

128. El representante del Irán afirmó que la situación del Africa Sudoccidental — que había venido empeorando — se agravaba aún más a causa de las condiciones existentes en Rhodesia del Sur y en los territorios bajo dominación portuguesa, y que la situación de toda el Africa meridional estaba cuajada de peligros.

129. La marcha de los acontecimientos parecía conducir hacia la total anexión del Territorio bajo Mandato por Sudáfrica y hacia la aplicación más estricta de la política de apartheid. El nuevo rigor dado a la opresión legislativa por medio de la *Criminal Procedure Amendment Act*, la *Official Secrets Amendment Act*, la *Police Amendment Act* y otras leyes propuestas obedecía al propósito de reprimir cualesquier medidas que adoptara la población africana para ejercer sus derechos fundamentales. Los apresurados preparativos realizados para poner en práctica el odioso informe Odendaal completaban el cuadro sombrío.

130. Contra semejantes antecedentes no se podía esperar que los africanos permaneciesen pasivos. Los peticionarios habían señalado el peligro de que estallara un repentino conflicto racial y aun el Jefe Albert Luthuli, Premio Nobel de la Paz y abogado de la no violencia, había dicho que, frente a la decisión inflexible de no abandonar una política que negaba a los africanos su legítima herencia, nadie podía culparles de buscar justicia por métodos violentos.

131. El llamado Ministro de Justicia de Sudáfrica había sostenido que las revueltas de Langer y Sharpeville de 1960 habían sido planeadas por los comunistas, y que su departamento tenía la responsabilidad de mantener el orden público en el Africa Sudoccidental. A continuación había advertido a la gente que no se dejaran engañar por una falsa sensación de seguridad, y había terminado diciendo que el ataque volvería a producirse y que estaría mejor organizado que la vez anterior. La situación quedaba así descrita por ambas partes como preparada para un inminente conflicto racial.

132. Había llegado pues el momento de que el Comité Especial emprendiese un estudio sistemático de la forma de vencer la intransigencia de Sudáfrica

y de impedir una mayor consolidación de la alianza entre Verwoerd, Smith y Salazar. La delegación del Irán estaba dispuesta a apoyar cualquier medida encaminada a devolver al pueblo africano su derecho inalienable a la libertad y a la justicia, y a impedir una catástrofe en el Africa meridional.

133. De conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, las Naciones Unidas debían hacer todo lo posible por revocar el Mandato y asegurar así la independencia y la libertad al pueblo del Africa Sudoccidental.

134. El representante de la República Unida de Tanzania observó que el Comité Especial había oído a peticionarios del Africa Sudoccidental y había podido comprobar que la situación no había mejorado. Aunque las Naciones Unidas habían aprobado muchas resoluciones en que se condenaba al régimen de apartheid por su opresión y explotación del pueblo del Africa Sudoccidental, ese régimen continuaba despreciando la opinión mundial.

135. El Comité Especial había sido informado por el Sr. Sam Nujoma, Pdsidente de la SWAPO, de que Sudáfrica había intensificado sus medidas de opresión contra la población indígena de Namibia; de que el secretario regional organizador de su organización había sido muerto a tiros; de que otro miembro había sido seriamente herido y de que otro más había sido asesinado brutalmente por la policía sudafricana. Esos asesinatos eran crímenes contra la humanidad, cometidos para aplastar la lucha por la emancipación del pueblo del Africa Sudoccidental, y la humanidad debía condenar a Sudáfrica por su política de colonización y explotación.

136. Era afligente que, a pesar de todas las declaraciones formuladas, algunos países e individuos influyentes continuasen desarrollando sus actividades en apoyo de la política de apartheid de Pretoria y en detrimento de la población indígena. El estudio efectuado sobre las consecuencias de las actividades de los monopolios extranjeros con intereses en Sudáfrica había demostrado que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, Bélgica, la República Federal de Alemania y muchos otros países tenían extensos intereses en el Territorio y realizaban inmensos beneficios, arrebatando al pueblo africano sus recursos naturales y sus medios de subsistencia. El representante de Tanzania citó un extracto del *International Trade Magazine* del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, reproducido en el *New York Herald Tribune* del 24 de febrero de 1964, donde se informaba que en 1963 las exportaciones de los Estados Unidos a Sudáfrica habían aumentado en 30 millones de dólares con relación al año precedente.

137. El párrafo 7 de la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General, de 13 de noviembre de 1963, pedía encarecidamente a los Estados Miembros que se abstuvieran de toda entrega de armas, material militar, petróleo o productos del petróleo a Sudáfrica. El estudio de las actividades de los monopolios extranjeros había demostrado que, al otorgar concesiones a largo plazo a los establecimientos financieros, Sudáfrica obtenía ciertas ventajas, tales como el abastecimiento de los artículos producidos o el control parcial de su utilización o distribución. Uno de los intereses activos era la Gulf Oil Corporation, que ayudaba

a Sudáfrica a obtener los mismos productos que la resolución de la Asamblea General había pedido encarecidamente que no se le proporcionaran.

138. Un aspecto aún más siniestro era la acumulación de fuerzas militares y de armas por los opresores. El peticionario, Sr. Nujoma, en la 417a. sesión del Comité Especial había indicado que el periódico *Le Monde* había informado que el vicepresidente de la Asamblea Nacional Francesa y el presidente del grupo parlamentario Francia-Sudáfrica, Sr. Raymond Schmittlein, había declarado que Francia continuaría vendiendo armas a Sudáfrica y acrecentando sus relaciones comerciales y culturales con ese país.

139. El representante de Tanzania recordó también que se habían publicado noticias de que Sudáfrica había comprado 16 helicópteros franceses Super Frelon, a un precio de unos 10 millones de libras esterlinas, y de que Francia proporcionaría submarinos en 1970, en contravención directa de la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General.

140. La existencia del régimen de la minoría racista en Rhodesia del Sur y su colaboración con Sudáfrica hacía aún más seria la amenaza a la paz y seguridad internacionales.

141. El momento de las declaraciones verbales había pasado. Ahora había que actuar. El pueblo libre de Africa había hecho repetidas propuestas para librar a la humanidad del flagelo del apartheid y de la opresión colonial. La delegación de Tanzania siempre había buscado la aplicación de las diferentes resoluciones de la Asamblea General relativas al Africa Sudoccidental, en particular las resoluciones 1514 (XV) y 1899 (XVIII), porque crearían las condiciones necesarias para el logro de la libertad para el pueblo africano. El representante de Tanzania expresó la esperanza de que quienes actuaban en forma perjudicial a la libertad y al progreso se aviniesen a ser orientados por la razón y la justicia en lugar de impulsados por su avaricia por las ganancias excesivas.

142. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la cuestión del Africa Sudoccidental había sido discutida en muchas oportunidades. Si figuraba con tanta frecuencia en el programa del Comité Especial era porque el régimen fascista de Verwoerd hacía reinar el terror, practicaba la explotación y se negaba sistemáticamente a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, este régimen adoptaba sin cesar nuevas medidas para oprimir a la población autóctona, sin escuchar los llamamientos y las recomendaciones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, convenía adoptar medidas que obligasen al régimen de Verwoerd a respetar las decisiones de las Naciones Unidas. La situación se había agravado recientemente por causa del odioso plan Odendaal para la creación de diez bantustanes, que no eran otra cosa que ghettos. Era preciso adoptar decisiones inmediatas.

143. Si durante veinte años el Gobierno de Sudáfrica había podido violar impunemente la Carta y las decisiones de las Naciones Unidas, era porque recibía ayuda del extranjero y aun de algunos Miembros de las Naciones Unidas. La resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General había señalado que el Gobierno de Sudáfrica recibía la ayuda de ciertas Potencias occidentales. Los estudios emprendidos habían probado que todos los sectores de la economía y

de la industria de Sudáfrica se encontraban en manos de extranjeros y de los colonos blancos. Los monopolios internacionales hacían tantos estragos en Sudáfrica como en Angola o Mozambique. Sus cuarteles generales estaban en Londres o en Nueva York. En esta forma, el Presidente de una compañía minera que operaba en el Africa Sudoccidental y en Sudáfrica había declarado no hacía mucho a un corresponsal de *The New York Times* que los beneficios anuales de su compañía ascendían al 27% del capital invertido. Las otras compañías inglesas y norteamericanas instaladas en Sudáfrica recogían ganancias del mismo orden. El periódico *The Observer* había destacado que estos monopolios podían amortizar sus inversiones en cuatro o cinco años. Si esto era posible, lo era porque el apartheid concedía a las compañías extranjeras ventajas que favorecían su explotación del país. Lejos de disminuir, esta explotación se intensificaba, por el contrario, de día en día. En noviembre de 1964, el *Times* pudo informar que los monopolios extranjeros habían decidido invertir 260 millones de dólares en Sudáfrica. Ese era un abierto desafío a las Naciones Unidas, a la OUA y a la opinión pública mundial. En marzo de 1965 el General Norstad, ex Comandante en Jefe de la OTAN, en una visita realizada a Johannesburgo por cuenta de la sociedad industrial que dirigía, había declarado que tenía plena confianza en el destino de Sudáfrica, y que esta confianza no era solamente la de un individuo, sino también la de los Estados Unidos y del pueblo americano. Otro industrial americano había declarado poco después que el boicot a Sudáfrica no reflejaba la opinión de la totalidad del pueblo americano. No era de sorprender, por lo tanto, que los Miembros de las Naciones Unidas con intereses en Sudáfrica y en el Africa Sudoccidental ayudasen al Gobierno racista y se negasen a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas.

144. Por otra parte, el Ministro de Defensa de Sudáfrica se había jactado recientemente de poseer 120 permisos para producir armamentos modernos. Afirmó haber obtenido todos los datos técnicos necesarios para fabricar estas armas, así como una licencia de la República Federal de Alemania para fabricar un tipo de bomba ultramoderna. Además, había agregado que Sudáfrica ya no debía dirigirse al extranjero para comprar armas, y que los propios gobiernos occidentales habían creado fábricas de armamentos en Sudáfrica para dotar a sus fuerzas armadas. Recientemente la cooperación militar con la República Federal de Alemania se había consolidado aún más, particularmente en lo que se refería al suministro de cabezas nucleares. Se acababa de crear cerca de Pretoria un instituto técnico de proyectiles dirigidos. En 1964 los especialistas de la República Federal de Alemania habían construido un centro para la guía de proyectiles en el Africa Sudoccidental. En cuanto al Instituto Aeronáutico, era financiado por el Ministerio del Ejército de la República Federal de Alemania. Por otra parte, la SWAPO había revelado que Sudáfrica había construido fábricas de gases tóxicos en Sudáfrica. ¿Contra quién se dirigía toda esta actividad si no contra los países africanos? Un miembro de la dirección de energía atómica de Sudáfrica había declarado que Sudáfrica debía producir bombas nucleares y utilizarlas contra los Estados africanos.

145. En noviembre de 1965, el aeródromo militar de Pretoria se había hecho cargo de siete aviones, con lo que ascendía a dieciséis el número de aviones com-

prados a Gran Bretaña. El 21 de octubre de 1965 el periódico *Flight International* había declarado que Sudáfrica iba a recibir aviones a reacción italianos ultramodernos, de marca Macchi MB 326, capaces de volar a una velocidad de 800 kilómetros por hora. En ese momento se podía poner en duda esta información, puesto que los motores ingleses de este avión debían estar comprendidos en el embargo, pero esas dudas habían sido rápidamente disipadas: los aviones debían efectivamente ser entregados por Italia y sus motores serían armados localmente en Sudáfrica. Debía señalarse que estos aviones podían recibir seis bombas de 200 kilogramos, cohetes y ametralladoras. Por lo tanto, era claro que Verwoerd tenía intenciones agresivas contra los países africanos.

146. Mientras se oían en las Naciones Unidas discursos lenitivos, cierto número de países occidentales continuaban prestando ayuda a los fascistas de Sudáfrica.

147. Era necesario, en consecuencia, hacer aplicar con toda urgencia las resoluciones 1899 (XVIII) y 1514 (XV). El Comité Especial debía hacer un llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y pedirles que apoyasen a la población del Africa Sudoccidental en su lucha por el derecho inalienable a la libre determinación.

148. Algunos países, entre los cuales se contaba Dinamarca, habían hablado de la decisión que al parecer debía tomar la Corte Internacional de Justicia; pero el estudio de este caso se prolongaba desde hacía ya un tiempo y se ignoraba cuándo, finalmente, se tomaría la decisión. Naturalmente, todo este tiempo perdido ayudaba al régimen de Verwoerd. Era injustificable seguir esperando más tiempo puesto que esta situación duraba desde hacía veinte años. En consecuencia, la delegación soviética apoyaba la propuesta encaminada a anular el Mandato de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental, presentada en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Era necesario establecer una fecha para la independencia de ese Territorio. En cuanto a los resultados de los estudios sobre la ayuda que ciertos países occidentales concedían a Sudáfrica, debían ser sometidos con toda urgencia al Consejo de Seguridad.

149. El Comité Especial debía recomendar que el Consejo de Seguridad tomase las decisiones necesarias, conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para obligar a todos los Estados Miembros a aplicar sanciones contra los regímenes de Smith, de Verwoerd y de Salazar, y para obligar a los tres regímenes fascistas a respetar sus obligaciones.

150. La delegación de la Unión Soviética prestaría su apoyo a todas las decisiones que se tomaran en ese sentido.

151. El representante del Afganistán dijo que, después de veinte años de discusión sobre el problema del Africa Sudoccidental en las Naciones Unidas, no se había logrado ningún progreso. Sudáfrica no había tomado una sola medida para poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General y se había negado a cooperar con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tenían una responsabilidad especial en el asunto y era esencial que encontrasen alguna forma para terminar rápidamente con el Mandato y para ayudar al pueblo del Territorio a conseguir su independencia y libertad.

152. El Gobierno de Sudáfrica alegaba que, con la terminación de la Sociedad de las Naciones, había expirado el Mandato. ¿Cómo, por lo tanto, podía ese Gobierno explicar su presencia en el Africa Sudoccidental? Era evidente que Sudáfrica no tenía título legal sobre el Territorio y que su único deseo era convertirlo en una colonia para inmigrantes blancos, perpetuando así la forma más abyecta de discriminación, usando al pueblo como una fuente barata de mano de obra y privándole de su tierra, riqueza y dignidad. Esta línea de conducta constituía un crimen contra la humanidad.

153. Al alegar que el Mandato había expirado, el Gobierno de Sudáfrica se anexaba al Territorio como si fuera suyo propio. Esta tendencia era extremadamente peligrosa. La declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur había demostrado claramente que los regímenes minoritarios y racistas eran capaces de desafiar a la opinión mundial; al condonar la acción de Rhodesia del Sur, las Naciones Unidas podrían encontrarse frente a otro hecho consumado.

154. En violación de las disposiciones del Mandato, el Gobierno de Sudáfrica había establecido bases militares. Los peticionarios habían mencionado que, según se decía, se había traído al Caprivi Zipfel Oriental, vía Rhodesia del Sur, equipo, incluso armas de fuego y artillería pesada, por un valor de 25 millones de libras esterlinas. Las razones de esta operación militar eran, aparentemente, la represión del deseo del pueblo de ser independiente y la resistencia a cualquier intento exterior para liberar al país de la dominación extranjera. El establecimiento de bases militares y la colusión entre Sudáfrica, Rhodesia del Sur y Portugal, constituían una amenaza a la paz internacional.

155. El Gobierno de Sudáfrica también trataba de impedir, mediante el asentamiento de inmigrantes extranjeros en gran escala, que los pueblos autóctonos del Territorio ejerciesen sus legítimos derechos políticos y económicos. El propósito de esa política era doble: proporcionar tierras a los colonos blancos y asegurar que, en caso de que con el tiempo se adoptara el principio de "un voto por persona", los colonos blancos fuesen más numerosos que la población africana, ganando así el control legal del país.

156. También debía recordarse que las propuestas de la Comisión Odendaal se estaban poniendo en práctica en el Africa Sudoccidental, intensificando así la política de discriminación en ese Territorio.

157. La presencia de Sudáfrica en el Territorio bajo mandato era una garantía para las compañías mineras y de otro tipo. Estaban en juego grandes intereses, que evidentemente sacaban partido de la continuación de la dominación sudafricana.

158. El Gobierno del Afganistán esperaba ansiosamente la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión, pero el aspecto jurídico era un aspecto de importancia secundaria. El problema principal era político: la terminación del Mandato y el acceso del Africa Sudoccidental a la independencia, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

159. En la resolución 1761 (XVII) de 6 de noviembre de 1962, la Asamblea General había pedido a los Estados Miembros que rompieran las relaciones diplomáticas y económicas con Sudáfrica y que se abstuvieran de proporcionar armas a ese país. Aun-

que algunos países habían roto esas relaciones, la resolución no había tenido efecto sobre la situación. Para encontrar una solución equitativa por medios pacíficos, las Naciones Unidas debían tomar medidas concretas contra el régimen minoritario de Sudáfrica; de otro modo, se provocaría una situación explosiva que podía originar un terrible conflicto racial. El Consejo de Seguridad debía considerar nuevamente la cuestión de Sudáfrica y examinar las relaciones económicas y comerciales entre ese país y los demás. El Gobierno del Afganistán condenaba la política de discriminación racial practicada por Sudáfrica, no tenía relaciones políticas ni económicas con ese país y prestaba pleno apoyo a las aspiraciones del pueblo de Sudáfrica.

160. El representante de Venezuela manifestó que hacía ya casi veinte años que las Naciones Unidas trataban de encontrar la forma de poner término a la situación que imperaba en el África Sudoccidental. Aun antes del nacimiento de las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, que había concedido a Sudáfrica un Mandato en el África Sudoccidental, ya se había ocupado de este problema.

161. La delegación de Venezuela había expuesto muchas veces la posición de su Gobierno. En el curso de estos veinte años, Venezuela no había dejado de plantear la cuestión del África Sudoccidental en las deliberaciones de los diferentes órganos de las Naciones Unidas. La posición del Gobierno de Venezuela había permanecido invariable tanto en el Comité Especial como en la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, del cual había sido miembro Venezuela. La delegación venezolana había incluso presentado una exposición detallada del problema en la 1460a. sesión de la Cuarta Comisión, en el curso del decimotercer período de sesiones de la Asamblea General. Esta exposición se había publicado el 30 de octubre de 1963 como documento oficial de la Asamblea General¹². Contenía un análisis jurídico, político, humano y práctico del problema; los miembros del Comité Especial podían consultarlo para ganar tiempo.

162. El hecho era que la situación había empeorado aún más en el África Sudoccidental. La delegación de Venezuela estaba convencida que las Naciones Unidas debían tomar ahora medidas más enérgicas, y reiteraba la posición que había adoptado en el curso del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General: las Naciones Unidas ni podían ni debían contentarse con resoluciones platónicas que iban a sumarse a las cerca de setenta resoluciones ya adoptadas desde hacía veinte años sobre ese tema, resoluciones en las que se repetían siempre las mismas cosas sin recomendar medidas prácticas.

163. Era necesario que las Naciones Unidas supieran que la cuestión estaba dentro de su competencia. No debía seguirse atando las manos de la Asamblea General y de sus órganos auxiliares con el pretexto de que la cuestión se encontraba *sub judice*. Muy por el contrario, las Naciones Unidas tenían el deber de actuar en carácter de Mandatario, porque las autoridades de Sudáfrica habían declarado que no reconocerían la validez de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia que no estuvieran de conformidad con sus aspiraciones. Y como para dar una prueba inmediata de ello, el régimen sudafricano había puesto en práctica las recomendaciones de la Comisión Oden-

daal y había decidido mantener la política inhumana de apartheid.

164. Por otra parte, se había alegado con frecuencia que se trataba de un problema de derecho. Ese era un pretexto que utilizaba la Potencia administradora para ganar tiempo y retrasar todas las medidas que podrían tomar las Naciones Unidas.

165. Como la delegación de Venezuela lo había afirmado en el curso del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, el Comité Especial tenía el deber de recomendar a la Asamblea General los medios y procedimientos adecuados para poner fin a la situación anormal que existía en ese Territorio y para asegurar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

166. El representante de Venezuela creía que sería útil crear un subcomité cuya tarea fuese la siguiente:

1) Estudiar y proponer al Comité Especial los medios más adecuados para poner término al Mandato de Sudáfrica en el África Sudoccidental;

2) Estudiar y recomendar los medios más apropiados para administrar el Territorio hasta su acceso a la independencia, es decir, hasta la aplicación total de la resolución 1514 (XV).

167. Este subcomité rendiría cuenta de su trabajo al Comité Especial que, a su vez, presentaría un informe a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones; ello podría servir de base para las deliberaciones de la Asamblea General, sin prejuzgar la decisión de la Corte.

168. El representante de Venezuela estaba dispuesto a hacer una propuesta formal en ese sentido. Esta propuesta, por otra parte, estaría en conformidad con la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1965, donde se declara que el Gobierno de Sudáfrica no ha cumplido sus obligaciones internacionales en lo que se refiere a la administración del África Sudoccidental y que, por razón de su política de apartheid, ha desafiado a la opinión mundial y perdido toda autoridad para administrar ese Territorio. Estaba igualmente conforme con las conclusiones de la Comisión I de la Conferencia Internacional sobre el África Sudoccidental reunida en Oxford del 23 al 26 de marzo de 1966, en particular con las contenidas en el párrafo 22 del anexo I del documento A/AC.109/L.290, así como con las declaraciones de los peticionarios.

169. El representante de Malí dijo que su delegación había suscrito sin reservas la resolución aprobada el año anterior por el Comité Especial, recomendando a la Asamblea General que apresurara la liberación del África Sudoccidental.

170. El problema esencial relativo al África Sudoccidental era el de la explotación de las tierras cultivables. El documento de trabajo proporcionado por la Secretaría (véanse los párrs. 1 a 68 *supra*) y los testimonios de los peticionarios habían demostrado que el régimen de Sudáfrica había despojado a los autóctonos en beneficio de los colonos blancos venidos de Sudáfrica y Europa. En efecto, estos últimos detentan más del 47% de las tierras, mientras que los africanos no tienen sino tierras pobres y que no producen lo suficiente. Los miembros del Comité Especial habían podido medir, por boca de los peticionarios, el grado de cinismo de estos colonos blancos, seguros del apoyo

¹² A/C.4/617.

de las Potencias coloniales e imperialistas. Haciendo más grave su caso, el Gobierno de Verwoerd contemplaba hoy la aplicación del innoble plan Odendaal. En cuanto a los bantustanes, constituían una negación flagrante de los derechos humanos.

171. La delegación de Malí, que en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General había pedido que se le retirase el Mandato a Sudáfrica, confiaba seriamente en que la Corte Internacional de Justicia condenaría al Gobierno de Verwoerd.

172. El problema de la descolonización había sido resuelto en principio por la resolución 1514 (XV). Ahora se trataba de encontrar soluciones concretas. El Comité Especial debía formular recomendaciones al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General para salvaguardar la vida de los africanos. La delegación de Malí, de acuerdo en este punto con la de Dinamarca, creía necesario retirarle el Mandato a Sudáfrica y abolir el apartheid. Igualmente era necesario pedir a las Potencias capitalistas que no invirtiesen capitales en Sudáfrica mientras durase este régimen abyecto.

173. Los peticionarios habían hablado de bases militares instaladas en el Africa Sudoccidental. La delegación de Malí se pronunciaba enérgicamente por la supresión de todas estas bases, que representaban una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

174. El representante de Malí creía que la Asamblea General podría celebrar un período extraordinario de sesiones a fin de considerar las medidas prácticas más apropiadas para suprimir el apartheid.

175. El Comité Especial debía aplicar la resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, que le imponía la obligación de buscar los mejores medios para asegurar la aplicación de la resolución 1514 (XV). En la misma forma era necesario fijar una fecha límite a la presencia de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental.

176. La delegación de Malí apoyaría toda propuesta en este sentido.

177. El representante de la India dijo que las Naciones Unidas venían considerando la cuestión del Africa Sudoccidental desde 1946 y que algunos de sus órganos habían adoptado resoluciones expresando una preocupación unánime ante la afligente situación en dicho Territorio. Era causa de profundo pesar y vergüenza que, en violación de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Gobierno de Sudáfrica, patológicamente racista, continuase su política abusando de la confianza colocada en él por la comunidad internacional. Al ampliar su política de apartheid al Africa Sudoccidental, el Gobierno de Sudáfrica condenaba a sus habitantes a una vida de miseria y frustración. La última prueba del verdadero parecer de Sudáfrica, la superioridad racial, se encontraba en el abierto apoyo prestado al régimen rebelde en Rhodesia del Sur. Esa política había sido descrita cínicamente como "civilización occidental", "libertad", "anticomunismo" y "elevación del Autóctono". Había continuado por demasiado tiempo y debía terminar inmediatamente si era posible.

178. La resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General había pedido encarecidamente a todos los Estados que se abstuvieran de proporcionar armas o equipo militar a Sudáfrica, que se abstuvieran de proporcionar petróleo y productos del petróleo a ese país y que desistieran de cualquier acto que pudiese impedir la

aplicación de esa resolución y de anteriores resoluciones sobre el Africa Sudoccidental. La delegación de la India creía que la aplicación pronta y fiel de la resolución por todas las naciones haría probable una solución pacífica. No obstante, si ciertos Estados Miembros, en particular los principales socios comerciales de Sudáfrica, continuaban encontrando razones falaces para rehusarse a cooperar con las Naciones Unidas, el pueblo del Africa Sudoccidental podría verse obligado a utilizar medios violentos para lograr sus derechos legítimos. Era una locura creer que la superioridad militar y el progreso económico podían impedir ese acontecimiento.

179. La situación se había visto agravada por el informe de la Comisión Odendaal, cuyas recomendaciones ya estaba poniendo en práctica el Gobierno de Sudáfrica y que tendrían el efecto de hacer del Africa Sudoccidental parte de Sudáfrica, extendiéndose a ese Territorio la estructura de segregación y de ghetto. Las recomendaciones de la Comisión se fundaban sobre la peligrosa premisa de que los grupos no blancos debían vivir en zonas separadas. Esta política era totalmente inaceptable para su delegación.

180. El representante de la India recordó que en una conversación privada, hacía tanto como el año 1946, el General Smuts había afirmado categóricamente que Sudáfrica no tomaría en cuenta ninguna resolución de las Naciones Unidas sobre el tema del Africa Sudoccidental. Aunque las Naciones Unidas ya habían declarado que cualquier intento de Sudáfrica de aplicar las recomendaciones de la Comisión Odendaal constituiría una agresión, la experiencia del pasado había demostrado que esa advertencia no tenía ningún peso, puesto que el régimen racista de Sudáfrica había ignorado con impunidad las resoluciones anteriores de la Asamblea General y había contraído una alianza impía con Portugal y con Rhodesia del Sur para perpetuar la supremacía blanca. Por lo tanto, el Comité Especial debía ejercer particular vigilancia para frustrar semejantes designios.

181. La opresión colonial en el Africa Sudoccidental era solamente una parte del cuadro. La explotación económica del Territorio era otra. El estudio sobre las consecuencias de las actividades de la industria minera y de otras compañías internacionales que tenían intereses en el Africa Sudoccidental había demostrado la estrecha relación que existía entre la dominación colonial y la explotación económica, de la cual los peticionarios también habían facilitado claros testimonios. No solamente Sudáfrica, sino varios otros países, estaban saqueando al Territorio, alegando que contribuían al bienestar de los habitantes autóctonos. Estas excusas eran poco astutas, porque las condiciones en el Africa Sudoccidental eran espantosas. La independencia política era esencial para que el país progresase económicamente.

182. Los gobiernos que se habían negado a aplicar las resoluciones de la Asamblea General habían invocado muchas veces la excusa de que el efecto más severo de las sanciones recaería sobre el pueblo del Africa Sudoccidental, en cuya defensa se imponían. Esa era una forma de dejar a un lado el problema. El pueblo del Africa Sudoccidental había declarado muchas veces que estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa para lograr su objetivo.

183. Algunos miembros habían considerado que no convenía que el Comité Especial o las Naciones Uni-

das examinaran la cuestión del Africa Sudoccidental porque estaba siendo considerada por la Corte Internacional de Justicia. El objeto de este argumento era distraer la atención del apoyo prestado por los socios comerciales de Sudáfrica. La Corte Internacional de Justicia trataba sólo de los aspectos legales del problema, no de los aspectos sociales, políticos y económicos, y no se esperaba que se expidiese sobre el porvenir político del Territorio. Las Naciones Unidas estaban autorizadas y, en realidad, estaban moralmente obligadas a examinar la situación y a estudiar el método para transferir el poder al pueblo autóctono. La tarea del Comité Especial era asegurar la rápida aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y la delegación de la India esperaba que no se le disuadiese de cumplir esa tarea.

184. El Gobierno de la India — que había sido el primero en presentar el problema de la política racista de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en 1946, y había tomado medidas efectivas para poner en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al Africa Sudoccidental — deploraba la ocupación ilegal de ese Territorio por el Gobierno sudafricano. Con un sacrificio considerable, había abandonado las relaciones comerciales con Sudáfrica mucho antes que las Naciones Unidas solicitaran a sus Miembros que lo hicieran. También había roto las relaciones diplomáticas. Una actitud similar por parte de otros y, en particular, de los principales socios comerciales de Sudáfrica, obligaría a ese país a ceder ante la opinión mundial. Sólo si el número mayor de países posible aplicaban las resoluciones de las Naciones Unidas, se podría lograr el objetivo deseado por medios pacíficos; de otro modo, pudieran ser inevitables la violencia y el derramamiento de sangre. El representante de la India no se oponía al progreso rápido y ordenado preconizado por el representante de Dinamarca pero, en el caso del Africa Sudoccidental, esa política no había sido eficaz. La paciencia y la moderación habían sido ejercidas durante más de dieciocho años por las Naciones Unidas, en la esperanza de un cambio. El tiempo estaba faltando y si los racistas sudafricanos se negaban a reconciliar su política con las condiciones en transición de Africa, no podrían hacer responsable a nadie más que a ellos mismos de las consecuencias.

185. El representante de Polonia dijo que, a pesar de que la cuestión del Africa Sudoccidental llevaba casi veinte años sometida a estudio por las Naciones Unidas, la situación estaba empeorando continuamente. El Comité Especial ya estaba enterado de las horribles condiciones en que la población de ese Territorio vivía desde hacía más de cuarenta años. No obstante, lo más alarmante era la intensificación de los preparativos militares, y especialmente la construcción de una base militar en el Caprivi Zipfel, cuya situación estratégica era suficiente para indicar contra quién iban dirigidos tales preparativos.

186. Del documento de trabajo preparado por la Secretaría (véanse los párrs. 1 a 68 *supra*) se desprendería claramente que era intención explícita del Gobierno sudafricano el anexar el Africa Sudoccidental permanentemente y consolidar su brutal política de apartheid. Sudáfrica continuaba haciendo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General y de otros órganos de las Naciones Unidas, en las que se pedía la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia

a los países y pueblos coloniales. Por tanto, en opinión del Gobierno de Polonia, Sudáfrica había violado el Mandato y la Carta de las Naciones Unidas, dejando de cumplir así con sus obligaciones como Miembro de la Organización. Le había sido posible actuar de esa forma por haber recibido el apoyo activo de ciertas Potencias influyentes, principalmente el Reino Unido y los Estados Unidos, que tenían intereses financieros en Sudáfrica y en el Africa Sudoccidental. Las actividades de los gobiernos extranjeros en el Africa Sudoccidental, donde la mano de obra era barata y los beneficios elevados, constituían uno de los principales obstáculos para su desarrollo.

187. Además, los Estados Unidos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania estaban ayudando a Sudáfrica a producir armas y equipo militar. Subrayando la importancia de lograr apoyo mundial para cualquier medida que el Comité pudiese tomar respecto al Africa Sudoccidental, el representante de Polonia dijo que no había sido accidental que sus resoluciones en que pedía apoyo moral y material para los derechos legítimos del pueblo a la independencia se hubiesen dirigido a todos los Estados. Por ello, la República Democrática Alemana había dado a conocer su opinión sobre el particular. A continuación, el representante de Polonia dio lectura a la comunicación que había recibido de dicho país:

“El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana ve con agrado el actual período de sesiones del Comité Especial de los Veinticuatro de las Naciones Unidas que se celebra en diversas capitales africanas, deseando que el Comité realice grandes progresos. En cuanto al debate sobre el problema del Africa Sudoccidental, tengo el honor de expresar lo siguiente:

“De conformidad con su actitud de principio de condenar todas las formas de colonialismo y de neocolonialismo y de conceder apoyo moral y material a los movimientos de liberación anticolonial en su lucha por la libertad y la independencia, la República Democrática Alemana apoya la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de diciembre de 1965. Se identifica con la justa demanda del movimiento de liberación nacional del Africa Sudoccidental para que se conceda la independencia y la libre determinación nacional al pueblo de ese Territorio, y considera los intentos del régimen de apartheid de Sudáfrica de anexarse esta zona como acto agresivo al que se debe poner fin por todos los medios disponibles. Ya en 1963, el Gobierno de la República Democrática Alemana explicó su posición con respecto a la política de apartheid de Sudáfrica (documento A/AC.115/L.26 del 2 de agosto de 1963) y no mantiene relaciones diplomáticas, consulares ni económicas con el régimen de Verwoerd. El Gobierno y el pueblo de la República Democrática Alemana ha tenido conocimiento, con especial indignación, de que con ayuda de la República Federal de Alemania las autoridades sudafricanas han establecido en el Africa Sudoccidental bases de cohetes y campos de entrenamiento, que se usan para fines militares, y que los monopolios de Alemania occidental participan en la explotación de la población africana del Africa Sudoccidental. Son indicios de las relaciones entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y Sudáfrica, que cada vez se hacen más estrechas, no sólo en la expansión

del comercio entre los dos Estados sino también la visita a Sudáfrica de Strauss, ex Ministro de la Guerra y presidente de uno de los partidos dirigentes de Alemania occidental que, durante su viaje, se expresó a favor de la ayuda militar de Alemania occidental al Estado del apartheid. El Gobierno de la República Democrática Alemana se disocia de esta actitud de la República Federal de Alemania y declara que siempre ha apoyado la lucha de la población del Africa Sudoccidental por la libre determinación nacional y la independencia y continuará haciendo lo mismo en el porvenir.

"Excelencia, le ruego que dé a conocer a los miembros del Comité esta actitud de la República Democrática Alemana."

188. Alemania había desempeñado un papel importante en los acontecimientos que habían dado origen al actual destino del pueblo del Africa Sudoccidental, puesto que colonizó aquel territorio antes de la primera guerra mundial. Entre las dos guerras mundiales, la Alemania nazi había extendido la ideología de la supremacía blanca en el Africa del Sur y Sudoccidental, y veinte años después de la segunda guerra mundial la República Federal de Alemania apoyaba a un régimen que seguía la política nazi de superioridad y discriminación racial. Sin embargo, la delegación de Polonia veía con agrado la existencia de otro Estado alemán soberano e independiente, la República Democrática Alemana, que prestaba de todo corazón su apoyo a la lucha del pueblo del Africa Sudoccidental por su libertad y su independencia.

189. Era interesante advertir que los gobiernos que se habían opuesto a la imposición de sanciones contra Sudáfrica eran los mismos que se mostraban también contrarios a la adopción de medidas eficaces para aplastar la rebelión de Rhodesia del Sur. La delegación de Polonia siempre había sostenido que la suerte de los africanos en Sudáfrica, Africa Sudoccidental, Zimbabwe y otros territorios de esa región era indivisible, ya que todos ellos se enfrentaban con una confabulación formada por las fuerzas de las camarillas industriales internacionales.

190. Hasta el momento, el Gobierno sudafricano había logrado impedir la acción concertada de las Naciones Unidas y destruir la oposición africana mediante su política de fragmentación en el Africa Sudoccidental. El hecho de que el litigio sobre el Africa Sudoccidental se encontrase todavía sometido a la Corte Internacional de Justicia había sido utilizado por la Potencia Mandataria como pretexto para diferir la acción de las Naciones Unidas.

191. La cuestión del Africa Sudoccidental constituía un desafío a la conciencia de la humanidad. A juicio de la delegación de Polonia no podía haber excepciones en cuanto respectaba a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Las Naciones Unidas no debían permitir que con sutilezas jurídicas se impidiese al pueblo del Africa Sudoccidental alcanzar su independencia. El Comité Especial debía darse cuenta de que Sudáfrica y sus aliados estaban haciendo todo lo posible para consolidar su imperio industrial y militar en la parte meridional de Africa y para perpetuar la explotación de los africanos. La delegación de Polonia consideraba por tanto que la Asamblea General y el Comité Especial debían ponerse de acuerdo sobre medidas concretas encaminadas a pri-

var a Sudáfrica de su Mandato y debían exigir también la retirada de todas las bases y personal militares del Africa Sudoccidental. La delegación de Polonia apoyaría cualquier resolución que pidiese el traspaso del poder al pueblo del Africa Sudoccidental, de conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Sufragaría por tanto que el Comité Especial recomendase a la Asamblea General la adopción de las medidas necesarias para privar a Sudáfrica de su Mandato sobre el Africa Sudoccidental y pidiera al Consejo de Seguridad que estudiase las medidas que habían de adoptarse para llevar a efecto el traspaso de poderes a un gobierno representativo, establecido como resultado de elecciones generales celebradas bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

192. El representante de Túnez subrayó que se trataba de un problema específicamente colonial que competía al Comité Especial y a la Asamblea General. Era preciso liberar a la población de este Territorio de la dominación a que la sometía un Estado que, aunque era Miembro de las Naciones Unidas y a pesar de todas las recomendaciones de esta Organización, continuaba oprimiéndola tanto en lo político como en lo económico y social. La situación que reinaba en el Africa Sudoccidental era indigna de los tiempos modernos, y era deber de la humanidad entera poner fin a ella. Los argumentos jurídicos invocados por ciertas delegaciones, que se escudaban en el fallo definitivo que debía pronunciar la Corte Internacional de Justicia, no podían constituir un obstáculo a las recomendaciones formuladas por la mayoría de los países Miembros de las Naciones Unidas, que habían exigido que le fuese retirado a Sudáfrica su Mandato sobre el Africa Sudoccidental.

193. El representante de Túnez concluyó reafirmando que apoyaría sin reservas todas las medidas concretas que adoptase el Comité Especial para responder a las legítimas aspiraciones del pueblo del Africa Sudoccidental.

194. El representante de Bulgaria señaló que el Comité Especial poseía numerosas pruebas de que Sudáfrica continuaba utilizando al Africa Sudoccidental como base militar, y de que en él estaba aplicando el régimen de apartheid. Las sanciones preconizadas por las Naciones Unidas contra Sudáfrica no habían dado resultado, a causa de la cooperación y la asistencia que las Potencias occidentales y los países miembros de la OTAN continuaban facilitando a aquel país. En su resolución 2074 (XX) la Asamblea General había condenado inequívocamente la política de los intereses financieros que actuaban en el Africa Sudoccidental y había denunciado las actividades nefastas de los monopolios imperialistas. Entretanto, estos mismos intereses continuaban haciendo inversiones en Sudáfrica y sosteniendo el régimen de apartheid. Había llegado pues el momento de que las Naciones Unidas adoptasen medidas concretas para poner fin a las actividades de estos grandes monopolios norteamericanos, y de otros monopolios occidentales, que retrasaban la liberación del pueblo del Africa Sudoccidental.

195. El representante de Bulgaria estimaba que el fallo de la Corte Internacional de Justicia sólo se refería a un aspecto de la cuestión, y que ya era hora de pronunciarse sobre el fondo, o sea de sustraer definitivamente al pueblo del Africa Sudoccidental a la do-

minación colonial, poniendo fin al Mandato de Sudáfrica sobre este Territorio.

196. En vista de que las resoluciones 1899 (XVIII) y 2074 (XX) de la Asamblea General no habían permitido obtener los resultados esperados, sólo quedaba ya pedir al Consejo de Seguridad que aplicase a Sudáfrica las sanciones establecidas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

197. El representante de Chile observó que la cuestión del Africa Sudoccidental, de la que las Naciones Unidas venían ocupándose desde hacía tantos años, había sido objeto de numerosos estudios, propuestas y resoluciones. Era hora de adoptar medidas eficaces para remediar la situación en este Territorio, cuya población continuaba siendo oprimida. Estimaba, pues, que el Comité Especial debía dirigir un llamamiento a todos los países para que cesara la ayuda a Sudáfrica, cualquiera que fuese su modalidad. Apoyaba además la propuesta del representante de Venezuela de que se crease un subcomité encargado de estudiar métodos para poner fin al Mandato encomendado a Sudáfrica.

198. El representante de la Costa de Marfil dijo que deseaba hacer notar ciertos hechos acaecidos en el Africa Sudoccidental después de aprobada la última resolución de la Asamblea General. De año en año, el cuadro de la situación del Africa Sudoccidental permanecía igualmente sombrío. Verwoerd y sus secuaces no habían renunciado a aplicar el odioso plan propuesto en el informe Odendaal. El objetivo de Verwoerd era anexionar el Africa Sudoccidental.

199. La población autóctona de ese Territorio se veía sometida a leyes represivas reforzadas. Efectivamente, aunque ya había sido suspendida la ley que autorizaba la detención durante 90 días, en 1965 había entrado en vigor una nueva ley, la *Criminal Procedure Amendment Act, No. 96*, más rigurosa que la anterior. Según lo estipulado en esta ley, las personas que servían o podrían eventualmente servir de testigos de cargo en ciertos procesos criminales podían quedar detenidas bajo incomunicación durante seis meses, al arbitrio del Fiscal General. En la *Official Secrets Act* se fijaba una multa de 1.500 rand y una pena de siete años de prisión. La *Police Amendment Act, No. 74*, de 1965, autorizaba a la policía para que, sin necesidad de mandamiento judicial, registrase a toda persona, todo local o cualquier otro lugar, todo vehículo, embarcación o aeronave y todo recipiente, cualquiera que fuese su naturaleza. Además de estas medidas represivas reforzadas, había que mencionar también la deportación masiva de africanos a las reservas así como la instalación de bases militares, equipadas por el Gobierno de Sudáfrica contra la voluntad de la población del Territorio. Sudáfrica, por tanto, había violado el compromiso que contrajera como Potencia administradora del Territorio del Africa Sudoccidental.

200. Aunque un aspecto de la cuestión fuese examinado por la Corte Internacional de Justicia, el representante de la Costa de Marfil estimaba necesario aplicar sin tardanza a este Territorio la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Al igual que los representantes de Dinamarca, Venezuela y Malí, creía que sería preciso retirar su Mandato a Sudáfrica tan pronto como la Corte Internacional de Justicia hubiese pronunciado su fallo sobre este asunto.

201. Para concluir, declaró que su delegación apoyaría toda resolución que dispusiera la aplicación de la

resolución 1514 (XV) de la Asamblea General al Territorio del Africa Sudoccidental, el retiro del Mandato a Sudáfrica y medidas encaminadas a restituir sus tierras a los habitantes autóctonos.

202. El representante de Siria manifestó que en las conclusiones del Comité Especial, en la legislación y en las declaraciones del Gobierno de Sudáfrica, y en el trato discriminatorio e inhumano de que se hacía objeto a la población indígena de ese Territorio se podían encontrar pruebas abundantes de la tiranía que reinaba en el Africa Sudoccidental. A pesar de la condenación del apartheid contenida en la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General, Sudáfrica había continuado actuando de la misma manera e incluso seguía gozando de la aprobación de ciertos visitantes ansiosos de beneficios.

203. La anexión unilateral de un territorio por un pretendido "fideicomisario" conduciría a la proliferación de la discriminación racial y a otras injusticias económicas y sociales, lo que constituiría no solamente una violación de las resoluciones de la Asamblea General y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, sino también una denegación de los derechos humanos fundamentales.

204. En vista de la persistente negativa de Sudáfrica a modificar su política, y en vista del período de espera necesario hasta que llegase la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Comité Especial debía adoptar inmediatamente una resolución que reflejase la oposición más enérgica posible a las políticas de Sudáfrica y previese la fijación de una fecha próxima para la liberación del Africa Sudoccidental, así como medidas para impedir la anexión del Territorio y para aplicar sanciones apropiadas.

205. El representante de Yugoslavia manifestó que, aunque el problema del Africa Sudoccidental venía preocupando a las Naciones Unidas desde hacía veinte años, no se había advertido ningún cambio favorable, sino que, por el contrario, la situación había empeorado. El Gobierno de Sudáfrica se había negado a escuchar las repetidas demandas de las Naciones Unidas de que no introdujera su política racista en el Africa Sudoccidental y aplicaba en cambio una política cada vez más brutal de integración de ese territorio a Sudáfrica y de sujeción de sus habitantes a la discriminación racial. Se negaban a la población indígena los derechos humanos fundamentales, y la reciente introducción de las medidas propugnadas por la Comisión Odendaal era la culminación de una política perversa y deshonesta. En la Cuarta Comisión, el representante de Sudáfrica había negado que se estuvieran poniendo en práctica esas recomendaciones, pero todo el mundo sabía que se habían destinado grandes sumas a comprar tierras como paso preliminar para el establecimiento de los llamados hogares para no blancos y que el Gobierno de Sudáfrica estaba fomentando la inmigración en gran escala de colonos blancos en el territorio. El objetivo de esa política era garantizar la supremacía permanente de los no africanos. Su delegación no podía sino condenarla. El Comité Especial, después de estudiar las consecuencias de las actividades de la industria minera y de otras compañías internacionales con intereses en el Africa Sudoccidental, había llegado a la conclusión de que las actividades económicas extranjeras constituían uno de los principales obstáculos para la independencia. Beneficios muy elevados, mano de obra barata y condiciones favorables para la explotación explicaban el deseo de

los inversionistas extranjeros de mantener el *statu quo* en el Africa Sudoccidental.

206. Además, la existencia de bases militares en Africa Sudoccidental violaba el Mandato y constituía un desafío a las demandas de las Naciones Unidas y de la opinión mundial. La acción del Gobierno de Sudáfrica era ciertamente contraria a los principios de la Carta y de la Declaración de los Derechos Humanos, y sólo el apoyo activo de sus aliados le permitía continuar actuando de ese modo.

207. Aunque quedaba muy poco tiempo, existía aún la posibilidad de una solución pacífica, siempre que las medidas recomendadas por la Asamblea General fuesen aplicadas pronta y totalmente por todos los Estados Miembros y en particular por los países que sostenían un comercio importante con Sudáfrica. El empleo de la fuerza tendría consecuencias que, a su juicio, nadie, incluidos los amigos de Sudáfrica, podría ver con satisfacción.

208. El Comité Especial y las Naciones Unidas tenían el deber de tomar rápidas medidas para poner fin inmediatamente a la peligrosa y vergonzosa situación del Africa Sudoccidental.

209. El representante de Sierra Leona recordó que, casi un año antes, el Comité Especial había adoptado una resolución por la que recomendaba a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad que adoptasen las providencias adecuadas para proteger la soberanía del pueblo del Africa Sudoccidental en cooperación con la OUA. La propia Asamblea General, en su resolución 1899 (XVIII), había pedido encarecidamente a todos los Estados que no lo hubieran hecho todavía, que se abstuvieran de toda entrega a Sudáfrica de armas, material militar o productos del petróleo, y les había pedido que se abstuvieran también de todo acto que pudiera estorbar la puesta en práctica de la resolución y de otras resoluciones anteriores de la Asamblea General relativas al Africa Sudoccidental.

210. Sin embargo, según habían declarado los peticionarios, todavía se suministraban armas y material militar a Sudáfrica, y este país poseía tanto petróleo que podía permitirse enviar a Rhodesia del Sur cantidades superiores a sus necesidades diarias. Las naciones interesadas no habían hecho nada que pudiera interpretarse como acto que "no estorbase" la puesta en práctica de la resolución de la Asamblea General, pero en realidad algunos países habían incrementado incluso su comercio con Sudáfrica o sus inversiones en dicho país, contribuyendo así al empeoramiento de la situación en el Africa Sudoccidental.

211. La Sociedad de las Naciones había encomendado a Sudáfrica que guiara al Africa Sudoccidental hacia su independencia. Se suponía que, entre otras obligaciones, Sudáfrica asumía la de fomentar el bienestar material y moral y el progreso social de los habitantes del Territorio. La Corte Internacional de Justicia había afirmado en repetidas ocasiones que las obligaciones de Sudáfrica no habían terminado al desaparecer la Sociedad de las Naciones y que Sudáfrica no tenía derecho a modificar unilateralmente la situación jurídica del Africa Sudoccidental, que seguía siendo un territorio bajo Mandato. Sudáfrica había traicionado su sagrado compromiso, puesto que la vida de los habitantes indígenas se hacía cada día más miserable; se introducían constantemente medidas opresivas para reducirlos al estado de animales, y las naciones que podrían ayudarles

a recobrar su dignidad no tomaban medida alguna sino que se limitaban a hacer declaraciones piadosas. La situación era deplorable.

212. El Africa Sudoccidental era un territorio potencialmente rico, pero su economía funcionaba enteramente en beneficio de la minoría de colonos blancos y de los inversionistas extranjeros. El capital extranjero obtenía en el Territorio los beneficios netos más altos del mundo. En el informe de la delegación del Comité Especial que asistió a la Conferencia de Oxford (A/AC.109/L.290) se mencionaba que en 1962 un minero blanco ganaba 1.200 libras por año mientras su equivalente africano ganaba únicamente 100 libras. La relación entre africanos y blancos era de 7 a 1 y sin embargo los colonos blancos poseían el doble de tierra que los africanos. Además, la tierra reservada a los africanos era pobre y sólo permitía a sus habitantes obtener lo necesario para su subsistencia. Una política deliberada de escasez de tierra y de pobreza impuesta hacía que los africanos abandonasen su hogar y su familia para dirigirse a las zonas de policía blanca donde eran cruelmente explotados y vivían en condiciones horribles. Semejante política sólo podía calificarse de esclavitud.

213. Todo niño blanco podía ir a la escuela secundaria y después a la universidad, y en cambio sólo un 0,3% de los africanos recibía enseñanza secundaria; la educación de la mayor parte de los africanos, si es que recibían alguna, terminaba al nivel inferior de la escuela primaria. Para empeorar la situación, era política declarada de Sudáfrica que las distintas comunidades financiasen su propia enseñanza. Por consiguiente no había posibilidad alguna de expansión de la enseñanza en las reservas africanas, que ni siquiera podían sostenerse a sí mismas.

214. Se había declarado que el Africa Sudoccidental no era económicamente viable y por tanto no podía aspirar a la independencia. Sin embargo, sus recursos de minerales y de petróleo producían un ingreso per cápita superior al de muchos Estados independientes, y era uno de los pocos países que exportaba más de lo que importaba. En la actualidad eran colonos y monopolios extranjeros los que explotaban todos sus recursos, pero, si se permitiera a la población indígena que se gobernara a sí misma, empezaría con un potencial mucho más alto que el de muchos Estados recién independizados que sin embargo conseguían rápidos progresos. Sudáfrica había hecho uso de sus poderes legislativos para fomentar sus propios intereses con perjuicio de la población indígena.

215. Contraviniendo el Mandato, Sudáfrica había establecido bases militares en el Africa Sudoccidental. Estas bases servían para dos fines: hacer que se pudiera llegar a cualquier lugar del territorio en un plazo de media hora, aterrorizando así a la población, y amenazar a los Estados africanos vecinos. El representante de Sierra Leona citó al respecto los párrafos 11 y 12 del Anexo III del documento A/AC.109/L.290 en donde se declara que se debe recabar del Consejo de Seguridad que ejerza las facultades que le confiere el Capítulo VII de la Carta para devolver la libertad al pueblo del Africa Sudoccidental y pedir a todos los Estados que estén dispuestos a actuar para conseguir esos objetivos.

216. La misión del Comité Especial era evidentemente tomar la iniciativa para poner fin a los métodos dilatorios de Sudáfrica y de algunos Miembros de las

propias Naciones Unidas. Había de velar por que se pusiera en práctica la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General, debía idear el modo de impedir que se extendiese la política de apartheid y, en fin, había de persuadir a Sudáfrica de que retirase sus bases militares del Territorio. Debería asimismo dirigir un llamamiento a los amigos de Sudáfrica pidiéndoles que no permitiesen a sus nacionales establecerse en ese país, de donde podían pasar después al Africa Sudoccidental. El procedimiento legal actualmente en curso en la Corte Internacional de Justicia no debía hacer olvidar las responsabilidades políticas del Comité Especial. Su delegación apoyaría toda resolución que se presentase con esos objetivos.

217. El representante del Irak recordó que el Comité Especial había oído a diversos peticionarios en relación con la cuestión del Africa Sudoccidental, cuyo testimonio en unión del informe de la Conferencia de Oxford y de los argumentos expuestos por el representante de Sierra Leona demostraba que la política de Sudáfrica en esta zona tenía efectos desastrosos para la vida de la población indígena. Contraviniendo el Mandato, se impedía el progreso económico y social, y desafiando a las Naciones Unidas Sudáfrica había empezado a establecer también bases militares en el Territorio. Era vergonzoso que Sudáfrica siguiese recibiendo ayuda militar de ciertos países y que los extranjeros obtuvieran beneficios equivalentes al 32% del producto nacional bruto del Africa Sudoccidental.

218. La delegación del Irak estimaba que el Comité Especial tenía el deber de eliminar esos males y por tanto apoyaría toda resolución que persiguiera ese fin. Esa resolución debería contener una recomendación al Consejo de Seguridad para que hiciese obligatoria para todos los Estados Miembros la aplicación de la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General y otra recomendación relativa al desmantelamiento de las bases militares en el Africa Sudoccidental.

219. El representante de Madagascar observó que, desde hacía veinte años, la comunidad internacional trataba desesperadamente de resolver de modo equitativo el problema del Africa Sudoccidental e intentaba sin éxito alguno poner fin por la negociación y la persuasión a la política racial que allí prevalecía. Sudáfrica seguía favoreciendo a la minoría blanca en perjuicio de los africanos, intensificaba la política de apartheid y despojaba a la población autóctona de sus bienes, con apoyo de los Estados que se negaban a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas.

220. Por eso, la delegación de Madagascar deseaba dirigir un llamamiento a todos los Estados pidiéndoles que revisaran su actitud para con Sudáfrica.

221. Se había dicho que la Corte Internacional de Justicia estaba a punto de llegar a su decisión sobre el Africa Sudoccidental. Era cierto que la cuestión del Mandato era un aspecto importante del problema, pero no había que hacerse ilusiones respecto de las consecuencias que podría tener la decisión de la Corte. No bastaría con que la Corte decidiese que se habían violado los términos del Mandato para liberar al Africa Sudoccidental. La población de este Territorio debía disponer de medios constitucionales para exponer sus reclamaciones. Por eso las Naciones Unidas y el Comité Especial tenían el derecho y el deber de examinar la cuestión y de formular las recomendaciones que considerasen útiles para evitar la destrucción de los valores humanos y velar por la paz del mundo. La delegación de Madagas-

car votaría en favor de toda propuesta constructiva que tuviese en cuenta la situación real.

222. El representante de Italia manifestó que el problema del Africa Sudoccidental era especialmente grave y revestía tres aspectos diferentes: el no cumplimiento por parte de Sudáfrica de las obligaciones del Mandato de 17 de diciembre de 1920, en virtud del cual se colocó el Territorio bajo su administración; la negativa de Sudáfrica a reconocer y aplicar en el Africa Sudoccidental la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales; y la introducción de la política de apartheid en el Territorio.

223. Era especialmente lamentable que Sudáfrica hiciese caso omiso de las obligaciones que le imponía el Mandato, ya que de ese modo debilitaba toda la estructura de la relación entre Estados. También era deplorable que Sudáfrica no comprendiese que la Declaración representaba un paso decisivo hacia el establecimiento de una nueva sociedad internacional basada en la libertad, la justicia y la cooperación. La causa principal de la inadmisible situación del Africa Sudoccidental consistía en la discriminación racial aplicada en virtud del régimen jurídico impuesto por el Gobierno de Sudáfrica.

224. La misión del Comité Especial era presentar a la Asamblea General sugerencias acerca del mejor modo de hacer frente a este problema. La delegación de Italia compartía la opinión de varios oradores de que la decisión pendiente de la Corte Internacional de Justicia sólo cubría uno de los tres aspectos principales del problema del Africa Sudoccidental, esto es la violación del Mandato. Los otros dos aspectos eran de la competencia del Comité Especial.

225. Sin embargo, toda medida que tomase la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones se habría de tomar a la luz de la decisión de la Corte Internacional, que se esperaba fuese dada a conocer antes que se iniciase el período de sesiones. Por ese motivo, su delegación estaba de acuerdo con el representante de Dinamarca en que no debía hacerse nada que pudiese prejuzgar la acción de la Asamblea General después de conocida la decisión. También hacía suya la propuesta del representante de Venezuela de que se estableciera un subcomité que se ocupase de la cuestión.

226. La experiencia había demostrado que los resultados del Mandato habían sido desastrosos, pero sin embargo su suspensión apresurada podría cortar el único lazo entre el Territorio y las Naciones Unidas, convirtiendo al Africa Sudoccidental en una especie de tierra de nadie e incluso justificando la actuación de Sudáfrica en él. Su delegación presentará más adelante propuestas relativas a la cuestión.

227. El Comité Especial debía presentar un frente común en cuanto al problema del Africa Sudoccidental y cuando llegase el momento de tomar una decisión, su delegación no se dejaría influir indebidamente por simples cuestiones de redacción.

228. Con referencia a las acusaciones contra la OTAN y las Potencias occidentales el representante de Italia manifestó que, a juicio de su delegación, esas acusaciones podían apartar la atención del Comité Especial de las verdaderas causas del problema, que no tenían nada que ver con la llamada asistencia de la OTAN o la visita de un general retirado de los Estados Unidos a Sudáfrica. En cuanto a la afirmación del representante de la Unión Soviética de que Italia había

suministrado equipo militar a Sudáfrica, el representante de Italia declaró que la acusación no tenía ninguna base real. Dos empresas italianas habían suministrado media docena de aviones equipados para la aviación civil antes que el Consejo de Seguridad aprobara su resolución sobre el apartheid; después de aprobada esa resolución se habían prohibido nuevos suministros. Esas dos empresas eran subsidiarias de la FIAT, firma de reputación internacional que acababa de firmar un contrato para enviar equipo por valor de 500 millones de dólares a la propia Unión Soviética. Esas acusaciones eran infundadas y su origen se podía encontrar en el Gobierno de Sudáfrica, al que interesaba sembrar la discordia entre los países de la Europa Occidental. El citado representante esperaba que el Comité Especial siguiera guiándose en sus deliberaciones por el deseo de establecer la verdad y no por ningún otro motivo.

229. La representante de los Estados Unidos de América dijo que deseaba referirse a algunos puntos concretos planteados durante el debate, especialmente los relativos a la decisión pendiente de la Corte Internacional de Justicia.

230. Esto no obstante, señaló primero que, en su país, era tradicional el derecho de los ciudadanos particulares a expresar sus opiniones personales, y que las repetidas referencias del representante de la Unión Soviética a las observaciones del General Norstad y de otros ciudadanos norteamericanos no le haría apartarse de esa tradición.

231. Su país compartía la inquietud general y el sentimiento de frustración que inspiraba el escaso progreso realizado para la solución del problema del Africa Sudoccidental. Al mismo tiempo, esperaba obtener resultados positivos de la decisión, tan largamente esperada, de la Corte Internacional de Justicia. El Artículo 94 de la Carta disponía que todo Estado Miembro se comprometiese a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que fuese parte y por consiguiente todos los Estados Miembros estaban obligados a respetar las decisiones de la Corte.

232. La representante de los Estados Unidos no creía que hubiese oposición alguna a un debate profundo del problema mientras estaban en curso las deliberaciones de la Corte. Se había creído bien que la Asamblea General debía abstenerse de tomar medidas concretas o hacer recomendaciones en relación con las cuestiones planteadas a la Corte hasta que ésta diese a conocer su fallo. Las medidas de las Naciones Unidas debían fundarse en una sólida base jurídica. Eso no quería decir que no pudiesen expresarse opiniones al respecto o que las Naciones Unidas no pudieran tomar medidas positivas. Su país había insistido siempre en que Sudáfrica debía cumplir el Mandato, y había condenado la política de apartheid de ese país tanto en su propio territorio como en cualquier otro lugar.

233. Como lo sabía muy bien el Comité Especial, su país había respetado escrupulosamente el embargo sobre el suministro de material militar. No debía tergiversarse ese hecho mediante falsas acusaciones de que la OTAN suministraba armas a un país que ni siquiera era miembro de esa organización. El Gobierno de los Estados Unidos no había apoyado la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General sobre el embargo de los productos de petróleo porque consideraba que esa medida sólo podía ser adoptada por el Consejo de Seguridad. Las cifras sobre el comercio con Sudáfrica no

eran realmente pertinentes; pero la representante creía saber que ciertas naciones cuyos representantes habían mencionado la cuestión sostenían en realidad un comercio floreciente con Sudáfrica.

234. Su propio país condenaba la estrecha política de gobernar a expensas de la mayoría. Sabía por experiencia propia los sufrimientos que se derivaban de tal política y tenía en curso una campaña de derechos civiles para que todos los ciudadanos de los Estados Unidos disfrutasen de iguales derechos; por consiguiente, no podía sentirse indiferente ante el grave problema del Africa Sudoccidental.

235. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas repuso que todo el mundo sabía que los países miembros de la OTAN y especialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania apoyaban al régimen de Sudáfrica. Los representantes de esos países podían negarlo, pero todo demostraba que era cierto, incluidas las declaraciones de los peticionarios que había oído el Comité Especial e incluso los artículos que se podían leer en la prensa. Reiteró que la revista *Flight International* había señalado que Sudáfrica disponía de aviones de combate a reacción, de construcción italiana, que podían llegar a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Italia podía alegar que esos aviones estaban destinados a la aviación civil, pero era muy fácil transformarlos en aparatos de guerra. Estos eran hechos y no acusaciones falsas.

236. Que la representante de los Estados Unidos invocara a propósito de las palabras del General Norstad, citadas anteriormente por el representante de la URSS, la libertad de palabra como fundamento de la democracia americana era, a su juicio, pura hipocresía. Tampoco podía afirmar sinceramente que el Gobierno de los Estados Unidos no tenía poder para oponerse a que aumentasen las inversiones norteamericanas en Sudáfrica ni que, a falta de una decisión contraria del Consejo de Seguridad, no existía ninguna razón válida para suspender la entrega de armas a Sudáfrica. ¿Había olvidado la resolución pertinente de la Asamblea General?

237. También el Reino Unido y la República Federal de Alemania estaban suministrando armas a Sudáfrica. A este respecto, citó un pasaje del telegrama dirigido al Comité Especial por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana. El propio Ministro de la Guerra de Sudáfrica había reconocido que la República Federal de Alemania aportaba ayuda militar al régimen que se encontraba en el poder en su país.

238. La política de los países de la OTAN formaba parte de una estrategia a largo plazo que tenía por objeto poner trabas al desarrollo de los pueblos africanos y sostener los bastiones del colonialismo en Sudáfrica, en Rhodesia del Sur y en las colonias portuguesas. En cuanto a la Unión Soviética, los hechos demostraban que ella era y seguiría siendo la amiga y verdadera aliada de los oprimidos.

239. La representante de los Estados Unidos de América reiteró que el Gobierno de los Estados Unidos respetaba y cumplía el embargo de armas, y pidió al representante de la Unión Soviética que probase las acusaciones generales que acababa de hacer citando un ejemplo concreto de material militar facilitado a Sudáfrica por los Estados Unidos en contravención del embargo.

240. El representante de Italia dijo que las acusaciones infundadas del representante de la Unión Soviética habían sido inspiradas por propaganda sudafricana o soviética y que confiaba en que el buen juicio de sus colegas pondría fin a estas acusaciones.

241. El representante de la República Unida de Tanzania señaló que Sudáfrica estaba actuando en contra de las Naciones Unidas y en contra de los deseos de millones de personas a las que preocupaban la dignidad del hombre y la libertad del pueblo del África Sudoccidental. Podía continuar su política de opresión porque continuaba recibiendo ayuda económica y militar de sus aliados; si se hubieran puesto en práctica las resoluciones de la Asamblea General, aquel país se hubiera visto obligado a reconsiderar su política.

242. Los africanos no podían permanecer indiferentes, en momentos en que se permitía que el respeto que sentían los norteamericanos por el derecho del individuo y las empresas privadas entorpeciese los progresos de África hacia la independencia. Su delegación esperaba que se le dijera que los datos que había dado relativos al aumento del comercio entre los Estados Unidos y Sudáfrica eran erróneos. Sin embargo, en lugar de eso se le habían comunicado declaraciones relativamente poco importantes del Presidente Johnson sobre el apoyo de los Estados Unidos a la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General.

243. Mientras Sudáfrica continuase disfrutando del comercio con los países más influyentes del mundo, no tendría motivos para cambiar su política. Se habían presentado ante el Comité Especial pruebas de que el pueblo del África Sudoccidental había sido desposeído, en muchos casos, de su tierra por el Gobierno sudafricano a favor de personas y de compañías extranjeras que deseaban explotar los recursos de mineral; de que la población estaba siendo sistemáticamente agrupada en reservas en tierras por regla general estériles que no podían proporcionarle un nivel de vida aceptable; de que era utilizada como reserva de mano de obra barata; de que, como se mostraba en el informe preparado por la delegación del Comité Especial que asistió a la Conferencia de Oxford (A/AC.109/L.290, anexo I, párrs. 7 y 8), se la estaba obligando a realizar trabajos de esclavos y se la estaba separando de sus familias; y de que el Gobierno de Sudáfrica había dado a algunas de las compañías privadas poder sobre la población indígena a cambio de los altos impuestos que pagaban dichas compañías.

244. El representante de Bulgaria manifestó que eran raras las delegaciones miembros del Comité Especial que no habían protestado contra las actividades de los monopolios occidentales que prestaban ayuda a Sudáfrica. Los hechos de referencia eran hechos comprobados, incluso mencionados en documentos oficiales de las Naciones Unidas tales como el informe del Comité Especial sobre las actividades de los monopolios extranjeros.

245. El representante de Dinamarca, refiriéndose a la afirmación de que los miembros de la OTAN habían proporcionado armas a Sudáfrica, dijo que la OTAN era una organización de defensa cuya función era tomar medidas para la defensa común de sus miembros. En los aspectos económico y político, éstos actuaban individualmente, y decir que las acciones individuales en estos aspectos eran la política deliberada de la OTAN era abusar del foro del Comité para fines de propagan-

da. Su país, miembro de la OTAN, nunca había proporcionado armas a Sudáfrica. Estaba totalmente de acuerdo con el representante de Tanzania en que se debía impedir a todos los países que proporcionaban armas a Sudáfrica que continuasen haciéndolo. Había tomado nota con satisfacción de que la representante de los Estados Unidos había confirmado que su país observaba la prohibición de proporcionar tales armas, y a no ser que el representante de la Unión Soviética pudiese citar ejemplos concretos en sentido contrario, se debían aceptar estas garantías.

246. El representante de Chile señaló que, según ciertas delegaciones, Sudáfrica debía su poderío militar a la ayuda que recibía de grupos militares regionales y a acuerdos bilaterales concertados con diversos países. Los representantes de los Estados a los que se citaba en esos casos decían que se los acusaba falsamente. Para saber la verdad era preciso hacer un estudio objetivo y escrupuloso de la cuestión.

247. Señalando a la atención general las comunicaciones de 16 de junio y de 6 de julio de 1965 que el Comité Especial había recibido del Gobierno de la República Federal de Alemania (A/AC.109/125 y 142), el representante de Chile observó que la República Federal de Alemania negaba haber instalado una base militar en el territorio del África Sudoccidental. Se trataría en realidad de un centro meteorológico construido en virtud de un acuerdo entre la Universidad de Leipzig y el Gobierno de la República de Sudáfrica. Ese centro no incluiría ninguna instalación militar y el Comité Especial había sido invitado a verificar sobre el terreno la exactitud de los hechos expuestos por el Gobierno de la República Federal de Alemania. Por otra parte, en el texto de un telegrama procedente del Gobierno de la República Democrática Alemana se afirmaba lo contrario. Para ver claro en esas contradicciones el Comité no tenía sino un medio: adoptar la decisión de proceder a una encuesta a fin de disponer de elementos de juicio que le permitiesen pronunciarse con mejor conocimiento de causa y cumplir así la misión que le había sido encomendada.

248. El representante de Australia declaró que su Gobierno tenía firmes opiniones sobre la cuestión del África Sudoccidental y consideraba apropiado que el Comité Especial se ocupara de la cuestión, pese a que la Corte Internacional de Justicia examinaba algunos de sus aspectos. Australia condenaba la política sudafricana en el África Sudoccidental y consideraba que las Naciones Unidas tenían un papel importante que desempeñar. Su delegación no apoyaba el argumento sudafricano de que el examen por la Asamblea General de la cuestión del África Sudoccidental infringía el principio *sub judice*. Por el contrario, Australia estimaba que la Asamblea General tenía un importante papel que desempeñar inmediatamente, pero las Naciones Unidas debían cerciorarse cabalmente de la solidez de su posición jurídica antes de emprender acción alguna que pudiera basarse en consideraciones puramente políticas. Su país se vería obligado a tener en cuenta el fallo de la Corte, que consideraría como la opinión jurídica definitiva sobre la cuestión. Era cierto que la Corte se ocupaba sólo de ciertos aspectos del problema del África Sudoccidental, pero ningún miembro del Comité podía prever el fallo o sus efectos y consecuencias. Las circunstancias del caso constituían uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de nuevas normas de conducta y actitudes humanas. El Comité

no debía, pues, prejuzgar ni anticiparse a lo que podría ser una decisión histórica.

249. Australia condenaba la negativa de Sudáfrica a reconocer los procesos que llevaban a la libre determinación y a asumir sus obligaciones internacionales. Su Gobierno se oponía también a la odiosa doctrina del apartheid y a los métodos represivos empleados para aplicarla, y había llevado a conocimiento del Gobierno sudafricano, clara y directamente, esa actitud.

250. Según el leal saber y entender del representante de Australia, su país no tenía intereses comerciales en el África Sudoccidental. Incluso si los tuviera, serían sin duda de una insignificancia tal que carecerían de toda importancia en las cuestiones que el Comité Especial tenía ante sí; y, en todo caso, su Gobierno jamás defendería a una empresa comercial que, en su afán por obtener utilidades, tratase sin miramientos o inhumanamente al pueblo. Corroboraba ese aserto el sistema industrial entero de Australia, en que el Gobierno y la actividad privada constituían un sistema bien equilibrado.

251. Australia, en su carácter de antigua Potencia Mandataria bajo la autoridad de la Sociedad de las Naciones, tenía especial interés en el Territorio bajo mandato del África Sudoccidental. Así como su país había hecho mucho para que las propias Naciones Unidas se formasen, así también había desplegado suma actividad en el desarrollo del régimen de Administración Fiduciaria, sobre todo cuando concluyó sin vacilar con las Naciones Unidas acuerdos de administración fiduciaria para que los territorios cuyo mandato tenía a su cargo se convirtiesen en territorios en fideicomiso. Australia se había guiado, y se guiaba aún, por el principio de reconocer claramente el derecho inalienable de todo pueblo a la libre determinación. Australia no practicaba ni preconizaba la limitación de las formas de gobierno que podrían elegir los pueblos, a condición de que éstos eligiesen con toda libertad. Tampoco consideraba que la independencia propiamente dicha revistiese una forma sencilla o invariable, pues su forma sólo podía ser determinada por el pueblo llamado a elegirla.

252. El método, los propósitos y los ideales de su delegación eran los que se enunciaban en la Carta de las Naciones Unidas. En el territorio en fideicomiso australiano de Nueva Guinea — antes territorio bajo mandato —, por ejemplo, el pueblo había elegido su Parlamento con una importante mayoría autóctona mediante un padrón basado en el principio de “un voto por persona”, prescindiendo de las consideraciones de raza, color o credo. En los adelantos así logrados, Australia no había hecho ninguna diferencia entre el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y el Territorio no autónomo de Papúa.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

253. En la 435a. sesión, celebrada el 7 de junio de 1966, el representante de Etiopía presentó un proyecto de resolución (A/AC.109/L.300) en nombre de los países siguientes: Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia.

254. Explicó que se había procurado incorporar en el proyecto de resolución las opiniones expresadas en el Comité Especial. Muchos de los puntos que en el texto se mencionaban constituían una nueva afirmación

de la posición que el Comité Especial había tomado en el pasado, y no debían suscitar dificultad alguna. La idea nueva más importante era la que figuraba en el párrafo 10 de la parte dispositiva, que preveía el establecimiento de un subcomité para estudiar a fondo la situación con miras a recomendar una fecha cercana para la independencia del África Sudoccidental. El establecimiento de un subcomité de ese tipo era especialmente importante teniendo en cuenta el inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia en el litigio iniciado por su país y por Liberia.

255. Los miembros del grupo afroasiático y Yugoslavia, al patrocinar el proyecto de resolución, tenían la firme convicción de que su aprobación contribuiría mucho a aliviar los sufrimientos del pueblo del África Sudoccidental, y confiaban en que el proyecto recibiese el máximo apoyo. Aunque los patrocinadores estaban dispuestos a aceptar cualquier enmienda que mejorase el texto, no podrían aceptar ninguna encaminada a debilitarlo.

256. El representante de la India observó que, además del párrafo 10 de la parte dispositiva, que se había incluido para tener en cuenta las sugerencias de varias delegaciones, la parte que era probable que suscitase discusiones era el párrafo 6 de la parte dispositiva, en virtud del cual el Comité Especial recomendaría al Consejo de Seguridad que hiciese obligatorio para todos los Estados el cumplimiento de las medidas contenidas en la resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General, y en particular las mencionadas en el párrafo 7 de la misma, en el que se pedía que se aplicase un embargo a los suministros de armas y de petróleo a Sudáfrica. El representante de la India manifestó que se habían hecho repetidas denuncias contra Sudáfrica por negarse a reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas, pero que si se permitía a otros Estados que continuasen apoyando a ese país, perdería rigor lógico toda condena del mismo.

257. El representante de Venezuela dijo que había tomado nota con la mayor atención del proyecto de resolución. Ese proyecto reafirmaba simplemente una serie de principios en cuyo favor había votado siempre la delegación de Venezuela, que no tenía, por lo tanto, ningún inconveniente en pronunciarse una vez más en su favor. Sin embargo, el representante de Venezuela consideraba útil presentar en nombre de Chile y de Venezuela una enmienda (A/AC.109/L.302) que no era más que la conclusión lógica de sus propias intervenciones, como también de las de muchas otras delegaciones, durante el debate general. La enmienda propuesta consistía en sustituir el párrafo 10 de la parte dispositiva del proyecto de resolución por el texto siguiente:

“10. *Decide* crear un Subcomité compuesto de cinco miembros nombrados por el Presidente, para estudiar y recomendar al Comité Especial:

“a) Los medios y procedimientos apropiados para poner término al Mandato de la República de Sudáfrica sobre el África Sudoccidental;

“b) Los medios y procedimientos más adecuados para administrar el Territorio hasta que obtenga la independencia; es decir, hasta que se cumplan completamente las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

“11. *Pide* al Subcomité que presente su informe al Comité Especial antes de que éste concluya sus reuniones del corriente año.”

258. Si se analizaba el texto de los nuevos párrafos propuestos se comprobaría que contenían elementos positivos que se ajustaban a las resoluciones ya aprobadas y a los deseos expresados por los peticionarios. Eran también conformes a las decisiones de la Conferencia sobre el apartheid celebrada en Oxford en marzo de 1966. El representante de Venezuela se refirió en particular al párrafo 22 del anexo I del informe de la Conferencia (A/AC.109/L.290). Por último, ese texto expresaba la opinión de la mayoría de los miembros del Comité Especial. Se limitaba a recoger los temas principales suscitados durante los últimos veinte años, y tenía el mérito de introducir en el texto original del proyecto de resolución una pequeña mejora que podía hacer progresar la cuestión y ayudar a la Asamblea General a hacer fracasar la política de Sudáfrica. No era posible seguir tolerando las sevicias de que eran víctimas los pueblos del África Sudoccidental, y el representante de Venezuela estimaba llegado el momento de recomendar a la Asamblea General que se realizase un estudio de la cuestión con miras a poner fin a esa situación intolerable.

259. El representante de Venezuela tenía la certeza de que todos los coautores del proyecto de resolución original se pronunciarían en favor de la enmienda a fin de que la población del África Sudoccidental, que tanto había sufrido desde hace cuarenta años, pudiese obtener finalmente la independencia.

260. El representante de Bulgaria se declaró de acuerdo, en general, con los principales conceptos contenidos en el proyecto de resolución. Recordó que los representantes de la Unión Soviética y Polonia habían formulado algunas sugerencias que contaron con la adhesión de su delegación. Esas sugerencias habían hallado expresión en los párrafos 6, 7 y 10 del proyecto de resolución. Aun aceptando en principio los conceptos fundamentales del proyecto de resolución, el representante de Bulgaria deseaba proponer cuatro enmiendas — patrocinadas conjuntamente por Bulgaria, Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.109/L.305) — que, a su juicio, reforzarían el proyecto de resolución sin modificar su fondo.

261. En primer lugar, la situación en el África Sudoccidental era sumamente peligrosa y representaba una grave amenaza a la paz. Esta idea no se expresaba, sin embargo, en ninguno de los párrafos del preámbulo ni de la parte dispositiva del proyecto de resolución, aun cuando figuraba en el último párrafo del preámbulo de la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General. Por consiguiente, en la primera enmienda se proponía que, al final del preámbulo, se agregase un nuevo párrafo, con el texto siguiente:

“Advirtiéndose con profunda inquietud la grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales que existe en esta parte de África, agravada aún más por la rebelión racista de Rhodesia del Sur.”

262. Conforme a la segunda enmienda, que se aplicaba al párrafo 1 de la parte dispositiva, el Comité Especial reafirmaría el inalienable derecho del pueblo del África Sudoccidental “a la libertad, la independencia y la integridad territorial”, en lugar de “a la libertad y a la independencia”.

263. La tercera enmienda consistía en añadir la frase “la cual constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales” al final del párrafo 5 de la parte dispositiva, en la cual se disponía que se

señalara a la atención del Consejo de Seguridad “la grave situación” que prevalecía en el África Sudoccidental “y su empeoramiento causado por la rebelión racista en Rhodesia del Sur”.

264. La cuarta enmienda consistía en agregar la siguiente frase al final del párrafo 10 de la parte dispositiva: “y pedir al Subcomité que presente su informe al Comité Especial al comienzo del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General”. Después de agradecer a los coautores del proyecto de resolución que hubiesen tenido en cuenta las ideas ya expresadas por las delegaciones de Bulgaria, Polonia y la Unión Soviética, el representante de Bulgaria expresó la esperanza de que aceptasen las enmiendas conjuntas.

265. El representante de Chile declaró que el texto del proyecto de resolución correspondía a una posición intermedia y justa que el Comité Especial podía aprobar, recomendaba métodos aprobados por las Naciones Unidas y contenía elementos nuevos que contribuirían seguramente a poner fin a la penosa situación en que se encontraba desde hacía tantos años el África Sudoccidental. El representante de Chile observaba con satisfacción que la opinión que él había expuesto hallaba expresión en el texto del proyecto de resolución.

266. Creía muy importante hacer un nuevo llamamiento a los Miembros de las Naciones Unidas y a otros Estados no miembros de la Organización para que cesasen toda asistencia de cualquier índole al Gobierno de Sudáfrica. Correspondía al Consejo de Seguridad transformar el llamamiento en obligación. Era evidente que todo el apoyo que se diese al régimen de Verwoerd reforzaba el sectarismo y contribuía a la opresión de los africanos, que constituían la mayoría de la población del África Sudoccidental. La delegación de Chile insistía muy especialmente en la ayuda económica y militar que ponía abiertamente a ese régimen en posición de superioridad con relación a la población autóctona, eternamente oprimida por los que poseían armas poderosas.

267. El párrafo 10 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado al Comité Especial expresaba la idea que la delegación de Venezuela había expuesto en el anterior período de sesiones de la Asamblea General y que había recordado durante el presente período de sesiones del Comité Especial. La delegación de Chile apoyaba resueltamente esa propuesta, pues estimaba que no se podía permanecer de brazos cruzados esperando el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino que el Comité debía emplear toda su energía en buscar una solución que permitiese revocar el mandato sobre el África Sudoccidental confiado a Sudáfrica por la Sociedad de las Naciones. Esa delegación creía preciso modificar el párrafo para definir con mayor exactitud las funciones y los objetivos del subcomité propuesto, y se había unido a la de Venezuela para presentar una propuesta de enmienda que esperaba fuese aceptada.

268. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comentando el proyecto de enmienda presentado por Chile y Venezuela (A/AC.109/L.302), al párrafo 10 del proyecto de resolución, dijo que la idea de crear un subcomité compuesto de cinco miembros designados por el Presidente parecía excelente, y el citado representante confiaba en que el Presidente, en consulta con los miembros del Comité Especial, velaría porque todas las tendencias estuviesen representadas en ese subcomité. En lo referente a los

incisos a) y b) del proyecto de enmienda, nada se oponía a que se los examinase, a reserva de que se mantuvieran las ideas principales del párrafo 10 original, es decir, la del "estudio detallado de la situación" y la de una "fecha cercana para la concesión de la independencia al Territorio". El representante estimaba que el texto del párrafo 10 del proyecto de resolución debía mantenerse en su forma original, salvo las posibles adiciones propuestas por Chile y Venezuela.

269. En la 438a. sesión del Comité Especial, celebrada el 8 de junio de 1966, el representante de la República Unida de Tanzania presentó un texto revisado del proyecto de resolución conjunto (A/AC.109/L.300/Rev.1), en el cual se había agregado la frase "así como sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales" al final del párrafo 5 de la parte dispositiva; y las palabras "y, entre otras cosas, recomendar" en el párrafo 10 de la parte dispositiva. Por indicación del representante de Chile, los patrocinadores reemplazaron la palabra "*things*" por la palabra "*matters*" en el texto inglés.

270. El representante de Tanzania explicó que los patrocinadores del proyecto de resolución consideraban que el texto revisado del párrafo 5 de la parte dispositiva satisfaría los deseos de los autores de la enmienda de las tres Potencias (A/AC.109/L.305) en la que se pedía que se hiciese una referencia separada a la "amenaza a la paz y la seguridad internacionales". Observó que la inserción de las palabras "y la integridad territorial" en el párrafo 1 de la parte dispositiva no era realmente necesaria, pues la cuestión principal residía en saber si Sudáfrica aceptaría o no su responsabilidad para con las Naciones Unidas. Sin embargo, si se insistía en ello, se podía remitir la cuestión a los patrocinadores del proyecto de resolución.

271. Con respecto a las enmiendas en que se pedía que el subcomité propuesto presentase un informe al Comité Especial antes del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General (A/AC.109/L.302 y 305), el representante de Tanzania consideraba que ése era el procedimiento normal. Sin embargo, los patrocinadores del proyecto de resolución estimaban que si se insistía en esa enmienda, no podía haber ninguna objeción real a ella.

272. El representante de Tanzania estimaba que la cuestión de hallar los medios de dar por terminado el Mandato sobre el África Sudoccidental debía excluirse, pues se le podría examinar más adelante. Los patrocinadores del proyecto de resolución le habían pedido que no insistiese en ese punto.

273. El citado representante consideraba que los párrafos 1 y 10 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado debían satisfacer los deseos de Chile y de Venezuela, y que el párrafo 5 satisfaría a Bulgaria, Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lamentaba la imposibilidad de satisfacer todas las solicitudes de enmiendas, pero señalaba que toda resolución era inevitablemente una transacción, y esperaba que el Comité Especial reconociese que el proyecto de resolución, tal como se lo había revisado, representaba lo mejor a que era posible llegar, dadas las circunstancias.

274. El representante de Bulgaria, hablando en nombre de las delegaciones de Polonia, Unión Soviética y Bulgaria, dijo que comprendía que los autores del proyecto de resolución no hubiesen podido aceptar modi-

ficaciones de fondo, y les agradeció que hubiesen tratado en lo posible de tener en cuenta sus enmiendas. En vista de la nueva redacción dada al párrafo 5 de la parte dispositiva, no insistirían en que sus enmiendas 1 y 3 fuesen sometidas a votación. Lamentaba que los autores del proyecto de resolución no hubiesen podido aceptar su segunda enmienda, encaminada a insertar las palabras "la integridad territorial" en el párrafo 1 de la parte dispositiva. En vista de las observaciones del representante de Tanzania y de que el Presidente del Comité Especial, quien designaría a los miembros del subcomité, les pediría expresamente que presentasen un informe al Comité Especial a más tardar a principios del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, no insistirían en que su segunda y cuarta enmiendas fuesen sometidas a votación.

275. El representante de Venezuela dijo que lamentaba que los patrocinadores del proyecto de resolución no hubiesen estimado conveniente aceptar las enmiendas presentadas por Chile y Venezuela (A/AC.109/L.302), que tendrían únicamente a defender los intereses de la población del África Sudoccidental. Las ideas contenidas en esas enmiendas correspondían a las declaraciones de los peticionarios y se ajustaban a las opiniones expresadas en la conferencia de Oxford.

276. El representante de Venezuela subrayó que no podría aceptar el argumento aducido por la Potencia administradora según el cual la cuestión del África Sudoccidental no podía ser examinada por las Naciones Unidas por haber sido sometida a la Corte Internacional de Justicia. Si los autores del proyecto de resolución querían considerar la cuestión en el sentido de que era exclusivamente de orden jurídico, las delegaciones de Venezuela y Chile estimaban, por su parte, que se trataba de una cuestión colonial. El punto esencial consistía en saber si el Comité Especial podía recomendar a la Asamblea General medios que permitiesen aplicar al territorio del África Sudoccidental la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El proyecto de resolución tal como estaba redactado no podía satisfacer al pueblo del África Sudoccidental, y no tenía plenamente en cuenta el mandato que la Asamblea General había confiado al Comité Especial.

277. Lo importante no era fijar una fecha para la independencia del África Sudoccidental, ni que la Corte Internacional de Justicia pronunciase un fallo en lo relativo al Mandato. El problema emanaba ante todo del hecho de que la Potencia administradora no reconocía ninguna autoridad a las Naciones Unidas para intervenir en los asuntos del Territorio, y que la aprobación de una resolución suplementaria en que no se hacía más que repetir lo ya expresado muchas veces no cambiaría en nada la situación.

278. Sin embargo, las delegaciones de Chile y de Venezuela, después de haber oído las explicaciones del representante de Tanzania y por espíritu de cooperación, convenían en retirar sus enmiendas.

279. El representante de Chile confirmó lo que había dicho el representante de Venezuela. Sus enmiendas tenían únicamente por objeto facilitar la tarea del Comité Especial y llegar a un texto que representase el punto de vista de todos los miembros del Comité Especial y no solamente el de un grupo geográfico.

280. El representante de la República Unida de Tanzania, hablando en nombre de los patrocinadores

del proyecto de resolución, dio las gracias a los autores de las enmiendas por su cooperación, y se manifestó de acuerdo con lo que el representante de Venezuela había dicho sobre el Mandato de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental. La cuestión principal en el Africa Sudoccidental era la de la independencia, existiese o no el Mandato, y el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no dejaba dudas al respecto. Estaba bien claro que el objetivo principal era aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; y los encargados de aplicar la resolución no debían sujetarse a los aspectos puramente académicos de las consideraciones jurídicas.

281. El representante de Venezuela había dicho que se habían aprobado demasiadas resoluciones y se habían adoptado muy pocas medidas. El representante de Tanzania coincidía plenamente con ese aserto. Los africanos se sentían frustrados ante el exceso de resoluciones y la falta de acción. Dos eran los caminos para acabar con el colonialismo: el de las resoluciones de las Naciones Unidas o la acción ulterior del Comité Especial, del Consejo de Seguridad o de otros órganos; o el de una lucha armada, en cuyo caso el árbol de la libertad se regaría con sangre africana.

282. Los africanos habían aguardado con la esperanza de que las Naciones Unidas emprendiesen una acción. Si las Naciones Unidas se desentendían de ellos, éstos tendrían que recurrir a las armas.

283. Refiriéndose a la cooperación desplegada entre América Latina y los países afroasiáticos, junto con Yugoslavia, el representante de Tanzania observó que ambos grupos de países habían sido colonizados en una u otra época, y su objetivo común era conquistar la independencia para sus hermanos de todas partes. La cooperación era la piedra angular de los trabajos y progresos del Comité Especial.

284. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de haber oído la declaración del representante de Venezuela según la cual el Comité Especial consideraría la cuestión del Africa Sudoccidental como una cuestión estrictamente jurídica, aclaró que la delegación soviética, por su parte, la consideraba como una cuestión política y colonial.

285. El representante de la India asoció a su delegación a todo lo dicho por los representantes de Venezuela y Tanzania. Estos hubiesen podido muy bien añadir la palabra "India" cada vez que mencionaron a Africa.

286. El representante de Australia consideró que el nuevo elemento más importante del proyecto de resolución era el párrafo 6 de su parte dispositiva. Australia no tenía intereses creados en los asuntos de comercio y abastecimiento a que apuntaba ese párrafo, pues no proporcionaba armas ni petróleo a Sudáfrica. Sin embargo, su delegación se oponía a la usurpación por el Comité Especial de las funciones del Consejo de Seguridad. Estaba seriamente preocupada por el párrafo 7, en el que se recomendaba que el Consejo de Seguridad adoptase medidas para garantizar que en el Territorio se eliminasen todas las bases e instalaciones militares. La delegación de Australia no podía apoyar esos dos párrafos ni tampoco el párrafo 3.

287. En cuanto al párrafo 3, el representante de Australia no vacilaba en condenar todo interés financiero que deliberada y desaprensivamente explotase al

pueblo y los recursos de la región e impidiera su progreso. Sin embargo, no podía aceptar la conclusión de que fuesen todos los intereses financieros los que hicieran tal cosa. El representante estimaba que había empresas comerciales dignas y honestas, y, por otra parte, el desarrollo de las actividades comerciales era esencial para el progreso del Territorio.

288. El representante de Australia tenía reservas que formular acerca del párrafo 10, pues Australia había sostenido siempre que la fijación de una fecha para la independencia era una cuestión que incumbía al pueblo interesado. En el párrafo 10 no se mencionaban ni se sugerían para nada la voluntad del pueblo ni las consultas necesarias. Nadie debía asumir el papel que correspondía al pueblo exclusivamente.

289. Por último, deseaba rendir homenaje a los esfuerzos evidentes de los copatrocinadores para redactar un proyecto de resolución que reflejase imparcialmente diversas opiniones. Al proceder así, habían logrado producir mucho que era aceptable para su delegación. El representante de Australia lamentaba que su delegación no hubiese recibido instrucciones de su Gobierno que la autorizasen a participar en la votación.

290. El representante de Dinamarca reiteró la enérgica oposición de su Gobierno a la constante opresión del pueblo sudafricano y a la obstinada actitud del régimen de Verwoerd con las Naciones Unidas. Este era el punto de vista desde el cual había considerado el Gobierno danés el proyecto de resolución. Por desgracia, no era una resolución de carácter general, como, a juicio de su delegación, hubiera convenido. Además, su delegación tenía algunas reservas respecto de ciertos párrafos. Su principal reparo se refería al párrafo 6, que iba más allá de la competencia de la Asamblea General. El representante de Dinamarca estimaba que todo miembro del Comité Especial comprendía tan bien como él mismo cuáles eran los límites de las esferas de competencia de los diversos órganos de las Naciones Unidas. Por esa razón, Dinamarca tendría que abstenerse en la votación. El hecho de que el Comité Especial no hubiese logrado una transacción satisfactoria se debía tanto a dificultades técnicas como a diferencias de opinión. El representante de Dinamarca esperaba que en lo futuro el Comité Especial podría ponerse de acuerdo sobre sus objetivos y sobre los medios más eficaces de alcanzarlos.

291. El representante de Italia convino en que había que adoptar una enérgica actitud común sobre el Africa Sudoccidental. Tras haber examinado el proyecto de resolución y haberlo señalado particularmente a la atención de su Gobierno, el representante de Italia había llegado a la conclusión de que, en su mayor parte, el proyecto era adecuado; pero tenía que formular reservas respecto de varios párrafos de la parte dispositiva.

292. No era claro el significado ni el alcance de la expresión "un crimen contra la humanidad". Su delegación podía aceptar esta expresión si se la consideraba como una condenación general del apartheid, pero si entrañaba consecuencias jurídicas, no podía apoyar el párrafo.

293. El representante de Italia sugirió que en el párrafo 3 las palabras "los grupos de intereses... los cuales" fuesen reemplazadas por las palabras "aquellos grupos de intereses que", pero de ser demasiado tarde para introducir esta enmienda se limitaría a pedir un voto separado sobre ese párrafo.

294. Refiriéndose al carácter inconstitucional de la resolución 1899 (XVIII), dijo que su delegación formularía reservas sobre el párrafo 6.

295. La recomendación al Consejo de Seguridad que figuraba en el párrafo 7 no concordaba completamente con la Carta de las Naciones Unidas. Además, como se trataba de pedir algo nuevo al Consejo de Seguridad, el Comité Especial había de examinar la cuestión con el mayor cuidado.

296. El representante de Italia pidió que se votase por separado sobre los párrafos dispositivos 3, 6 y 7, y manifestó que, si se aprobaban en su forma actual, Italia tendría que abstenerse en la votación sobre la resolución.

297. La representante de los Estados Unidos de América expuso las reservas de su delegación, que se referían a ciertas dificultades mencionadas en su declaración anterior y también en la declaración de la delegación de Italia.

298. Aclaró que apoyaba la petición de que se aplicase un embargo a los envíos de armas porque rechazaba el apartheid, y declaró que los Estados Unidos habían respetado escrupulosamente el embargo sobre las armas. Si la resolución hubiera hecho una distinción entre un embargo sobre las armas y las sanciones económicas, su Gobierno podría haberla apoyado. Los Estados Unidos tendrían pues que abstenerse si se votaba por separado sobre los párrafos 3 y 6. No podía apoyar una acusación general de los intereses económicos y hubiera preferido denuncias concretas de las condiciones de trabajo y de la política laboral aplicada por las compañías extranjeras que operaban en el África Sudoccidental.

299. La representante de los Estados Unidos formuló una reserva en cuanto a las atribuciones del Comité Especial, y estimaba que, en espera de la decisión de la Corte Internacional, el Comité no debía tomar ninguna medida como la recomendada en el párrafo 7.

300. Los Estados Unidos tendrían que abstenerse en la votación sobre la totalidad de la resolución, si bien estaban de acuerdo con ella cuando se condenaban las prácticas raciales y se pedía apoyo para el pueblo del África Sudoccidental en sus esfuerzos por ejercer la libre determinación, y también cuando se condenaba implícitamente a Sudáfrica por no haber sabido cumplir con sus obligaciones respecto de las Naciones Unidas y del pueblo del África Sudoccidental.

301. El representante de Venezuela explicó que la actitud de su delegación en cuanto a la estricta delimitación de las funciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas la obligaba a abstenerse en la votación sobre los párrafos 6 y 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

302. Aunque votaría a favor del párrafo 3 de la parte dispositiva, tenía ciertas reservas al respecto. Su delegación no estaba convencida, como ya lo había señalado en otra ocasión, de que las actividades de los intereses económicos que operaban en el Territorio constituyesen el obstáculo principal, incluso el único obstáculo, para la libertad y la independencia del África Sudoccidental: el problema esencial lo constituía el hecho de que el Territorio estaba sujeto a Sudáfrica; no se trataba pues de que el Comité Especial condenase todos los intereses económicos, sino únicamente los que explotaban los recursos humanos y materiales del Territorio e impedían su progreso.

303. La delegación de Venezuela precisó además, con respecto al párrafo 8 del proyecto de resolución, que había apoyado, que desde luego se entendía que el apoyo moral y material que se pedía a los Estados Miembros era el que se preveía en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, señaló que al votar a favor de un proyecto de resolución que no le satisfacía completamente, la delegación de Venezuela quería dar prueba de colaboración con sus amigos africanos.

304. El representante de Chile manifestó su gratitud a los autores del proyecto de resolución por el espíritu de comprensión y cooperación que habían demostrado. Indicó que, aunque la delegación de Chile votaría a favor del proyecto, no por ello dejaba de formular algunas reservas; por ejemplo, el párrafo 3 de la parte dispositiva era ciertamente demasiado afirmativo. No todos los intereses extranjeros eran perjudiciales: debió hablarse de los intereses de los Estados que adoptaban una actitud imperialista. En cuanto a los párrafos 6 y 7 de la misma parte dispositiva, el orador había expresado ya su parecer al respecto, e indicado los límites que el Comité Especial debía respetar para atenerse a la Carta: en efecto, no incumbía al Comité Especial decir al Consejo de Seguridad cómo había de proceder. El párrafo 8, en cambio, se atenía a la Carta.

305. El proyecto de resolución revisado (A/AC.109/L.300/Rev.1), con las modificaciones introducidas oralmente, fue sometido a votación en la 439ª sesión, celebrada el 9 de junio de 1966, en la forma siguiente:

El párrafo 3 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 18 votos contra ninguno y 3 abstenciones. La votación se desarrolló en la forma siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia.

El párrafo 6 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra 1 y 4 abstenciones. La votación se desarrolló en la forma siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Estados Unidos de América.

Abstenciones: Chile, Dinamarca, Italia, Venezuela.

El párrafo 7 de la parte dispositiva fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra ninguno y 5 abstenciones. La votación se desarrolló en la forma siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia, Venezuela.

La resolución en su totalidad, en su forma revisada, fue aprobada en votación nominal por 18 votos contra ninguno y 3 abstenciones. La votación se desarrolló en la forma siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia.

306. La resolución relativa a la cuestión del África Sudoccidental (A/AC.109/177), aprobada por el Comité Especial en su 439a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1966, dice así:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo oído a los peticionarios,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Recordando asimismo la resolución 2074 (XX), de 17 de diciembre de 1965, y otras resoluciones de la Asamblea General, así como del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en lo referente al África Sudoccidental,

"Tomando nota con inquietud de la política seguida por el Gobierno de Sudáfrica para suprimir y frustrar indirectamente los derechos políticos y económicos de los autóctonos del África Sudoccidental mediante el asentamiento de gran número de inmigrantes en el Territorio,

"Advirtiendo asimismo con profunda inquietud la constante presencia de bases y otras instalaciones militares en el África Sudoccidental, en violación de las resoluciones 1805 (XVII), de 14 de diciembre de 1962, y 2074 (XX), de 17 de diciembre de 1965, de la Asamblea General,

"1. Reafirma el inalienable derecho del pueblo del África Sudoccidental a la libertad y a la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y reconoce la legitimidad de su lucha por lograr ese derecho;

"2. Condena la política de apartheid y de discriminación racial seguida por el Gobierno de Sudáfrica en el África Sudoccidental, que constituye un crimen contra la humanidad;

"3. Condena las actividades de los grupos de intereses económicos que operan en el África Sudoccidental, los cuales explotan los recursos humanos y materiales, impiden el progreso del Territorio y frustran el derecho del pueblo a la libertad e independencia;

"4. Condena la política seguida por el Gobierno de Sudáfrica para suprimir y frustrar indirectamente

los derechos políticos y económicos de la población autóctona del Territorio mediante el asentamiento en el mismo de gran número de inmigrantes extranjeros;

"5. Señala a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación que prevalece en el África Sudoccidental y su empeoramiento causado por la rebelión racista en Rhodesia del Sur, así como sus consecuencias para la paz y seguridad internacionales;

"6. Recomend a al Consejo de Seguridad que haga obligatorio para todos los Estados el cumplimiento de las medidas contenidas en la resolución 1899 (XVIII), de 13 de noviembre de 1963, de la Asamblea General, y en particular las mencionadas en el párrafo 7 de la misma;

"7. Recomend a asimismo al Consejo de Seguridad que adopte las medidas necesarias para garantizar que en el Territorio se eliminen todas las bases e instalaciones militares;

"8. Insta a todos los Estados a que den a la población africana del África Sudoccidental apoyo moral y material en su lucha por la libertad e independencia;

"9. Invita al Secretario General a que se ponga en contacto con los organismos especializados y otras organizaciones internacionales pertinentes con el propósito de prestar asistencia a los refugiados procedentes del África Sudoccidental;

"10. Decide constituir un subcomité que haga un estudio detenido de la situación y, entre otras cosas, recomiende una fecha próxima para la independencia del Territorio;

"11. Decide comunicar esta resolución al Presidente del Consejo de Seguridad;

"12. Decide asimismo mantener en su programa el tema del África Sudoccidental y tenerlo sometido a constante estudio."

307. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 14 de junio de 1966¹³.

308. En su 455a. sesión, el Comité Especial decidió que el subcomité constituido conforme al párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución quedase integrado por los miembros siguientes: Costa de Marfil, Dinamarca, Etiopía, India, Polonia, Túnez y Venezuela.

E. NUEVO EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

309. El Comité Especial volvió a examinar la cuestión del África Sudoccidental en sus reuniones 460a. y 465a. a 468a. celebradas el 5 de agosto y el 12, 14, 15 y 19 de septiembre de 1966.

310. En la 460a. sesión, el Presidente y algunos miembros del Comité Especial formularon declaraciones sobre el dictamen emitido el 18 de julio de 1966 por la Corte Internacional de Justicia sobre los juicios relativos al África Sudoccidental entablados por Etiopía y Liberia en contra de Sudáfrica el 4 de noviem-

¹³ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7370.*

bre de 1960. Mediante el voto decisivo del Presidente, estando divididos los votos en siete contra siete, la Corte había fallado que no podía considerarse que Etiopía y Liberia hubieran demostrado ningún derecho o interés jurídico en el asunto que era objeto de sus peticiones, por lo cual había decidido desecharlas.

311. El Presidente manifestó que varios miembros habían expresado el deseo de que por ser ésta la primera reunión del Comité Especial sobre asuntos de fondo con posterioridad al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, el Presidente debía hacer una declaración sobre los hechos recientes relativos a la cuestión del Africa Sudoccidental.

312. Con posterioridad a la última reunión del Comité Especial, el mundo había recibido con asombro y decepción el dictamen de la Corte Internacional de Justicia en el juicio sobre el Africa Sudoccidental. Así era sobre todo porque con tal dictamen la Corte Internacional había eludido todos los puntos jurídicos de fondo sometidos a su decisión. Había dejado de dictaminar sobre el apartheid, sistema de administración que constituía con meridiana claridad una violación del mandato y de la Carta de las Naciones Unidas. Había dejado de dictaminar sobre las obligaciones de la República de Sudáfrica de someterse a la autoridad fiscalizadora de las Naciones Unidas en cuanto a su administración del mandato. En realidad, incluso había dejado de confirmar su opinión anterior con respecto a la misma existencia del mandato. La Corte prefirió el expediente de eludir todos los asuntos importantes que se le habían presentado con un arbitrio de mero procedimiento, al dictaminar que Etiopía y Liberia no habían demostrado tener ningún derecho o interés jurídico en la materia.

313. Cabía preguntar, como lo hizo el Magistrado Jessup de los Estados Unidos en su opinión disidente, el motivo de que la Corte había de "tolerar una situación en que se imponía a las partes muchas dificultades y gastos para estudiar todos los detalles que abonaban el caso, sólo para que se les dijera" — y esto después de seis largos años de litigio — "que la Corte no atendería a ninguno de sus argumentos y pruebas, porque se declaraba no haber lugar a la reclamación por un motivo preliminar que excluía toda investigación de sus aspectos de fondo". En realidad, la Corte había inducido a la opinión pública a creer, con su dictamen de 1962 adoptado por mayoría de ocho a siete votos, que ya se había resuelto la cuestión de las partes en la controversia, y que pasaría a investigar el fondo de la misma. Por un accidente del azar, lo que fue la minoría de la Corte en 1962 se convirtió en una mayoría en 1966 en virtud del voto decisivo del Magistrado Spender de Australia, circunstancia que permitió que la minoría de 1962 interpretase y anulase de hecho el dictamen adoptado por una mayoría de la Corte en 1962.

314. Por estos motivos, no era sorprendente que grandes sectores de la opinión internacional creyesen que este dictamen había socavado el prestigio de la Corte como instrumento para resolver controversias internacionales y suscitaba una grave duda en cuanto a su integridad y utilidad. Tampoco debía sorprender que se levantasen voces para pedir una representación más equitativa en la composición de la Corte y un examen más a fondo de sus actividades.

315. En efecto la Corte Internacional no anulaba ni su dictamen de 1962 ni sus opiniones consultivas de 1950, 1955 y 1956, por las que había determinado si el

mandato continuaba en vigor y que Sudáfrica seguía obligada a aceptar la fiscalización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el hecho de que Sudáfrica se había negado a aceptar las tres opiniones anteriores de la Corte Internacional sobre el Africa Sudoccidental, suscitaba una grave duda sobre la conveniencia de seguir recurriendo a la Corte por cuestiones de fondo.

316. El resultado de las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia había constituido un amargo desencanto para los Estados africanos y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas, que durante tanto tiempo habían buscado por medios pacíficos una solución a este difícil problema. Es cierto que había Estados cuyos representantes se pronunciaban en contra de toda acción positiva por la Asamblea General o el Comité Especial, por considerar que esa acción podría prejuzgar el caso que se presentó a la Corte Internacional. Durante seis años habían exhortado a la cautela, mientras la Corte Internacional no dictaminase.

317. Ahora ya se había pronunciado el dictamen tan largo tiempo esperado. Constituía un acto fútil, aunque no del todo, porque ahora quedaba en claro fuera de toda duda que no había más excusa para aguardar. Había llegado el momento de que las Naciones Unidas adoptasen una acción concreta.

318. No debía quedar ahora duda alguna de que el problema del Africa Sudoccidental era esencialmente político, como también lo era su solución. Ya existía una base política y moral irrefutable para la acción de las Naciones Unidas, y aunque un dictamen favorable hubiera representado un arma más, la base para la acción no quedaba socavada de ninguna manera por el dictamen de la Corte.

319. Los miembros del Comité Especial sabían bien que, en tanto que la Corte Internacional había estado deliberando sobre el caso del Africa Sudoccidental, el Gobierno sudafricano había continuado sus preparativos para establecer en el Africa Sudoccidental los llamados "territorios patrios" recomendados por su Comisión Odendaal. Si este plan se llevaba a cabo plenamente daría por resultado la partición del territorio y su anexión por Sudáfrica. El Gobierno sudafricano había aplazado la decisión sobre la creación efectiva de los "territorios patrios" y sobre otros asuntos conexos, en tanto se conocía el dictamen de la Corte Internacional y se terminaban los últimos preparativos. Ahora los preparativos estaban terminados o a punto de terminarse.

320. Sería oportuno recordar a Sudáfrica que la Asamblea General, en su resolución 2074 (XX) de 17 de diciembre de 1965, manifestó que:

"Considera que todo intento de dividir el Territorio o de adoptar medidas unilaterales que directa o indirectamente preparen dicha división constituye una violación del Mandato y de la resolución 1514 (XV);

"Considera asimismo que todo intento de anexar una parte o la totalidad del Territorio del Africa Sudoccidental constituye un acto de agresión."

321. Por consiguiente, el Comité Especial debía mantener una especial vigilancia y debía tratar de lograr que las Naciones Unidas adoptasen medidas inmediatas si Sudáfrica seguía adelante con la propuesta partición del Africa Sudoccidental y trataba de anexarse el Territorio.

322. El Comité Especial estaba encargado de obtener la aplicación en el África Sudoccidental de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. También era de recordar que la Asamblea General por resolución 1805 (XVIII) de 14 de diciembre de 1962 asignó otras varias tareas concretas al Comité Especial en cuanto al África Sudoccidental. Por esta resolución se pidió al Comité Especial que tratara de lograr los objetivos señalados en la resolución 1702 (XVI) de la Asamblea General, de fecha 19 de diciembre de 1961, objetivos que incluían: la abolición de todas las leyes y reglamentos que establecían y mantenían el intolerable sistema de apartheid; la preparación de elecciones generales para la Asamblea Legislativa, lo antes posible, a base del sufragio universal de los adultos, bajo la vigilancia y el control de las Naciones Unidas; asesoramiento y asistencia al gobierno emanado de las elecciones generales, con miras a preparar al territorio para la independencia completa; y la coordinación de la asistencia económica y social que prestasen los organismos especializados.

323. En vista de lo dicho, el Presidente confiaba en que el Subcomité del África Sudoccidental considerase y recomendase al Comité Especial, lo antes posible, la fecha que debía fijarse para el logro de estos objetivos.

324. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que su delegación apoyaba completamente la declaración del Presidente.

325. El representante de Malí dijo que su delegación también deseaba felicitar al Presidente por su declaración. La Corte Internacional había mostrado con su fallo que el problema de la descolonización no podía resolverse por los medios legales que habían escogido los africanos. Por consiguiente los Estados africanos, junto con los Estados amantes de la paz de los demás continentes, debían ahora examinar seriamente el problema y ver cuál era el mejor método de asegurar que Sudáfrica no se apoderase del Territorio del África Sudoccidental.

326. El Comité Especial tomó nota de las comunicaciones que habían enviado los siguientes Estados Miembros de las Naciones Unidas acerca del dictamen de la Corte Internacional: Bulgaria (A/6372), la India (A/6250), la Costa de Marfil (A/6371), Kenia (A/6387), Mongolia (A/6407), Nigeria (A/6346), el Paquistán (A/6388), Polonia (A/6402) y Turquía (A/6413).

327. En sus 465a. a 467a. sesiones, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité del África Sudoccidental (A/AC.109/L.325) establecido en virtud del párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité en su 439a. sesión del 9 de junio de 1966. El informe aparece al final de este capítulo.

Peticiones escritas y audiencias

328. El Comité Especial distribuyó las peticiones siguientes sobre el Territorio:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>
Sr. Jackson Kambode, Secretario General del South West Africa Trade Union Movement y miembro del South West Africa People's Organization (SWAPO)	A/AC.109/PET.434/Add.6

<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>
Sr. Gottfried Hage Geingob, representante en los Estados Unidos de América, SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.7
Sres. Sam Nujoma, Presidente, y Solomon Mifima, miembro del SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.8
Sr. Peter Nanyemba, miembro del SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.9
Sr. N. Mahuiriri, Presidente interino del SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.10
Sr. Ewald Katjivena, representante en Argelia, SWAPO...	A/AC.109/PET.434/Add.11
Sr. Sam Nujoma, Presidente, SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.12
Sr. Jaotto, Secretario, SWAPO	A/AC.109/PET.434/Add.13
Jefe Hosea Kutako, Dirigente del National Unity Democratic Organization (NUDO)	A/AC.109/PET.450/Add.2
Dos peticiones de la SWANU..	A/AC.109/PET.459/Add.2
Sres. Mburumba Kerina, Secretario de Coordinación y Nathanael Mbaeva, Secretario de Finanzas, South West Africa National United Front (SWANUF)	A/AC.109/PET.474/Add.1 y 2
Jefe Fritz Gariseb en nombre de la Damara Community....	A/AC.109/PET.534
Sr. Omer Bécu, Secretario General, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)	A/AC.109/PET.535
Sr. Irving Brown, representante de la CIOSL	A/AC.109/PET.535/Add.1
Jefe Mostafa Rahnama, editor de la revista <i>Hayat Moslemín</i> , Teherán	A/AC.109/PET.536
Sr. M. F. Nouveau-Piobb	A/AC.109/PET.537
Sr. Carl-Axel Valén, Secretario General, Asamblea Mundial de la Juventud (AMJ)	A/AC.109/PET.538
Jefes H. S. Witbooi e I. D. Isaak	A/AC.109/PET.539
Sr. Kanburzada Murad Bey, Movement for Human Rights, Karachi	A/AC.109/PET.540
Sra. A. M. Hughes, Secretaria de Estado, Union of Australian Women	A/AC.109/PET.541
Sra. Rosa Jasovich-Pantaleon, Secretaria General, Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), Berlín	A/AC.109/PET.542
The International Student Conference, Nairobi	A/AC.109/PET.543
Sr. Louis Saillant, Secretario General, Federación Sindical Mundial (FSM)	A/AC.109/PET.561
Sres. Kloppers, Presidente del Coloured Council, y Phillips, Presidente de la South West African Coloured Organisation	A/AC.109/PET.571

329. La petición que se ha indicado con la signatura A/AC.109/PET.474/Add.1 contiene una solicitud de audiencia que fue aprobada por el Comité Especial en su 464a. sesión del 9 de septiembre de 1966. Sin embargo, los peticionarios que solicitaron la audiencia no han comparecido todavía ante el Comité Especial.

Declaraciones de los miembros sobre el informe del Subcomité del Africa Sudoccidental

330. El representante de la India, Relator del Subcomité del Africa Sudoccidental, al presentar el informe del Subcomité (véase el apéndice), declaró que el Subcomité, al reunirse poco después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 18 de julio de 1966, expresó su profundo pesar por la decisión de la Corte Internacional de desestimar la cuestión planteada por Etiopía y Liberia por razones de carácter técnico, sin entrar en el fondo del asunto. El Subcomité condenó unánimemente la bárbara administración por Sudáfrica del Territorio bajo mandato y su actitud intransigente frente a muchas peticiones de las Naciones Unidas. El Subcomité estaba convencido de que Sudáfrica, por su conducta invariable, se había excluido a sí misma de la administración del Mandato del Africa Sudoccidental.

331. El Subcomité creía firmemente que, si se aplicaran sin trabas ni demoras las medidas esbozadas en el párrafo 32 de su informe, se facilitarían enormemente las perspectivas de restaurar los derechos legítimos de la población del Africa Sudoccidental. También esperaba que el Comité Especial aprobaría el informe pronto y unánimemente.

332. Las reservas de la delegación de Dinamarca a que se hacía referencia en el párrafo 35 del informe eran meramente provisionales y se remitían sólo a dos puntos del informe. Eran necesarias por faltar instrucciones del Gobierno de Dinamarca sobre las cuestiones de que en ellos se trataba. El representante de la India esperaba que el representante de Dinamarca se hallaría pronto en condiciones de retirar esas reservas.

333. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que su delegación apoyaba plenamente las conclusiones y recomendaciones del Subcomité. Pese a las diversas resoluciones de las Naciones Unidas, en las que se pedía la evolución progresiva del Territorio bajo Mandato del Africa Sudoccidental hasta su independencia, el régimen de apartheid de Sudáfrica no había hecho sino incrementar su opresión a la población africana y del Territorio. Había establecido instalaciones militares con el objeto exclusivo de reprimir las aspiraciones legítimas de la población africana a la liberación. Había desposeído a la población africana de sus tierras y había concedido amplios arriendos a intereses financieros de países occidentales que explotaban sin piedad los recursos naturales y humanos del Territorio y aplicaban de modo automático la política de apartheid de Sudáfrica. Había aprobado legislación de carácter opresivo destinada a mantener condiciones de trabajo análogas a la esclavitud. Sobre todo, había aprobado legislación encaminada a eliminar la familia africana por métodos tales como el establecimiento de barrios de mala nota.

334. El Africa Sudoccidental ya no era una mera colonia sino un campo de concentración semejante a los de los nazis. Era hora ya de que se adoptasen medidas concretas para eliminar de una vez para siempre las graves injusticias perpetradas contra la población del Territorio.

335. En vista de que la cuestión del Africa Sudoccidental sería estudiada con carácter prioritario por la Asamblea General dentro de unas dos semanas, se sumó al Relator del Comité en la propuesta de que el Comité Especial aprobase por unanimidad el informe del Comité para presentarlo inmediatamente a la Asamblea.

336. El representante de Malí dijo que casi todos los miembros del Comité Especial estaban comenzando a percatarse del peligro cada vez mayor que entrañaba el mantenimiento de la política reaccionaria y bárbara del Gobierno de Sudáfrica, basada en el sistema vergonzoso del apartheid. Los racistas blancos de Pretoria, tras sus vanas tentativas de anexarse el Africa Sudoccidental, se valían de métodos crueles y opresores para explotar los recursos minerales y agrícolas del país. La delegación de Malí deploraba profundamente que la Corte Internacional de Justicia, al rechazar la queja de Etiopía y Liberia, hubiese prestado aliento a Sudáfrica para proseguir su política malvada.

337. Aun cuando, gracias a la histórica Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, ya hubiesen doblado las campanas por el colonialismo, las Naciones Unidas todavía tenían que obligar a las Potencias administradoras a cumplir sus disposiciones y, en particular, obligar al Gobierno de Sudáfrica a respetar las 73 resoluciones aprobadas por la Asamblea General a lo largo de casi 20 años. Sudáfrica debía permitir a la población del Territorio alcanzar la libre determinación y la independencia. Las Potencias imperialistas de la Europa occidental y los Estados Unidos se sentían remisos a adoptar medidas contra Sudáfrica, sencillamente porque les ofrecía oportunidades lucrativas para la inversión privada; su apoyo era la única razón de la actitud desafiante del Gobierno de Sudáfrica. La delegación maliense seguiría examinando este aspecto de la cuestión durante el próximo debate sobre el Africa Sudoccidental en la Asamblea General. Mientras tanto instaba al Comité Especial a aprobar por unanimidad las recomendaciones y conclusiones del Subcomité del Africa Sudoccidental.

338. El representante de Etiopía expresó formalmente el apoyo total de su Gobierno al informe presentado por el Subcomité del Africa Sudoccidental y dijo que abrigaba la esperanza de que el Comité Especial lo aprobaría por unanimidad.

339. En el informe no se examinaba la cuestión de cómo habría de establecer la Asamblea General su autoridad en el Territorio internacional del Africa Sudoccidental, dejando que esta cuestión fuese decidida por la propia Asamblea. Se trataba de un informe objetivo que destacaba ciertos hechos irrefutables. En primer lugar, el Africa Sudoccidental constituía una responsabilidad que incumbía a las Naciones Unidas, hecho reiteradamente afirmado incluso por la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, la Asamblea General y, en verdad, toda la humanidad civilizada habían apelado a Sudáfrica con respecto a sus responsabilidades en virtud del Mandato; pero no sólo había desoído Sudáfrica esos llamamientos y resoluciones de las Naciones Unidas, sino que había adoptado varias medidas claramente contrarias a los principios en que se había basado el sistema de mandatos de la Sociedad de las Naciones. Puesto que no cabía esperar respuesta conciliatoria alguna de Sudáfrica, era indispensable que la Asamblea General actuase a fin de garantizar los derechos de la población del Africa Sudoccidental a la libertad y a la independencia. A menos que las Naciones Unidas adoptasen medidas apropiadas respecto al problema del Africa Sudoccidental, que no era sino parte del problema más amplio del enfrentamiento racial en el Africa meridional, el prestigio de la propia Organización se vería en peligro.

340. El representante de Madagascar dijo que durante viajes recientes había podido comprobar que tanto en la población de su propio país como en las de Asia y África había causado asombro el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el África Sudoccidental, que parecía privar de toda esperanza a la población de ese Territorio.

341. Su delegación apoyó el informe del Subcomité del África Sudoccidental. Instó al Comité Especial a aprobar el informe por unanimidad y demostrar con ello a los pueblos del África Sudoccidental que, en su lucha por la paz, la independencia y la igualdad racial, no estaban solos sino que podían contar con el apoyo de todos los pueblos del mundo amantes de la paz.

342. El representante del Irak apoyó el informe del Subcomité del África Sudoccidental.

343. El informe destacaba que la cuestión del África Sudoccidental había sido objeto de muchas resoluciones de la Asamblea General y que, de perdurar la situación actual, se perjudicaría al prestigio de las Naciones Unidas. Habida cuenta de la larga historia de debates estériles y resoluciones desatendidas, su delegación se preguntaba si no se había menoscabado ya en cierta medida el prestigio o la autoridad de por lo menos algunos órganos de las Naciones Unidas.

344. A juicio de la delegación del Irak, el contenido de los apartados i) y ii) del inciso c) del párrafo 32 no eran verdaderas recomendaciones, sino meras exposiciones de hechos por todos sabidos. Los pasajes realmente importantes eran los apartados iii) a vii) que pedían la revocación del Mandato de Sudáfrica, el establecimiento de una organización para administrar el África Sudoccidental y el ejercicio del Mandato por la Asamblea General y solicitaban al Secretario General que iniciase preparativos para el ejercicio del Mandato.

345. Su delegación estimó que debería enmendarse la redacción de ciertas partes del inciso c) del párrafo 32 con objeto de expresar un mayor sentimiento de urgencia. En el apartado iii) deberían insertarse las palabras "en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General" tras las palabras "Las Naciones Unidas deben decidir". Análogamente, en el apartado v), una expresión como "a más tardar en el próximo período de sesiones de la Asamblea General" expresaría mejor el sentimiento de urgencia que las palabras "lo antes posible".

346. Salvo estas consideraciones, la delegación del Irak apoyaba el informe y votaría a favor.

347. El representante de Yugoslavia dijo que el Gobierno de Sudáfrica había violado las disposiciones de la Carta y el Mandato del África Sudoccidental al intentar la partición y anexión del Territorio y al proseguir una política despiadada de apartheid. Pese a la oposición vehemente y constante de las Naciones Unidas, Sudáfrica no había cejado en sus esfuerzos por poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Odenaal en violación notoria de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General. Se negaban a la población autóctona del África Sudoccidental los derechos humanos fundamentales, a la vez que sus recursos humanos y naturales eran objeto de explotación

inmisericorde en beneficio del régimen sudafricano y de los colonos blancos.

348. Contrariamente a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al Territorio, se habían establecido bases e instalaciones militares con el propósito de reprimir el movimiento de liberación nacional y perpetuar las ventajas que el régimen racista de Sudáfrica obtenía de la condición actual del Territorio. A pesar de que la Asamblea General había aprobado 73 resoluciones al respecto, Sudáfrica había ignorado sus obligaciones en virtud del Mandato, se había negado a reconocer la autoridad supervisora de las Naciones Unidas y había persistido en su política de apartheid. La mayoría abrumadora de los Miembros de las Naciones Unidas habían hecho denodados esfuerzos por hallar una solución pacífica al problema. Uno de esos esfuerzos fue la queja presentada por los Gobiernos de Etiopía y Liberia a la Corte Internacional de Justicia contra la República de Sudáfrica. Por desgracia, tras un largo período de espera, la comunidad internacional, que había esperado un fallo recto de la Corte, había sufrido una grave decepción. Al excluir la posibilidad de resolver el problema por medios judiciales, la Corte había impuesto a la Asamblea General la responsabilidad de lograr una solución por medios políticos.

349. La delegación de Yugoslavia apoyaba totalmente las conclusiones y recomendaciones formuladas en el valioso informe del Subcomité. Estaba convencida de que la aplicación de dichas recomendaciones permitiría al pueblo del África Sudoccidental lograr la independencia completa en conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Seguiría apoyando cualquier medida emprendida por los países de África y de Asia y por Miembros de las Naciones Unidas para lograr que la población del África Sudoccidental pudiese ejercer sus legítimos derechos.

350. El representante de Siria manifestó que su delegación apoyaba sin reservas el informe del Subcomité. La cuestión de Sudáfrica era un caso claro de anexión y opresión por un conquistador que, pese al gran número de resoluciones de las Naciones Unidas que condenaban su abominable práctica del apartheid, trataba ahora de difundir todavía más esa práctica, desafiando los principios de las Naciones Unidas y la opinión pública mundial. El citado representante abrigaba la esperanza de que el informe sería aprobado por unanimidad.

351. El representante de Australia dijo que el Gobierno de Australia seguía manteniendo las opiniones que ya expresó en privado al Gobierno de Sudáfrica y públicamente en diversas ocasiones. Australia consideraba que el África Sudoccidental era un territorio no autónomo con respecto al cual existían obligaciones internacionales concretas. En consecuencia, Australia estimaba que se aplicaban al África Sudoccidental los principios que rigen dichos territorios, en particular el deber de promover el gobierno propio verdadero y la aceptación de la doctrina de la libre determinación y del principio del progreso hacia la igualdad de condición de todos los habitantes del Territorio. No obstante, como las cuestiones jurídicas y políticas que entrañaba este problema todavía no habían sido objeto de un estudio adecuado ni por su delegación ni por el Comité, deseaba reservarse su posición general sobre el informe y, en particular, no podía apoyar en ese momento los

apartados iii) y iv) del inciso c) del párrafo 32 ni el párrafo 33.

352. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el Gobierno de la Unión Soviética publicó una declaración sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en la que lo denunciaba como fallo vergonzoso emitido en beneficio de los racistas sudafricanos y de sus protectores imperialistas y expresaba su apoyo total a la población del África Sudoccidental y a los Estados africanos y asiáticos que se oponían a la medida ilegal de la Corte.

353. La Unión Soviética, que consideraba vergonzosa la política de discriminación racial y de apartheid seguida por el régimen racista de Sudáfrica, estaba dispuesta a apoyar cualesquiera medidas que los Estados africanos pudiesen considerar necesarias para garantizar la pronta liberación de la población sudafricana del yugo colonialista y su ejercicio del derecho a decidir su propio destino.

354. La Unión Soviética siempre se pronunció a favor de la aplicación íntegra e incondicional de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y de su aplicación al África Sudoccidental. La delegación soviética había apoyado con su voto todas las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas.

355. Dio su apoyo a varias de las recomendaciones que figuraban en el informe del Subcomité, especialmente las que preveían la revocación de los derechos y responsabilidades de Sudáfrica sobre el Territorio, como Potencia mandataria, la organización de elecciones basadas en el sufragio general de los adultos y la adopción de medidas por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, en caso de que Sudáfrica se negara a aceptar las decisiones de las Naciones Unidas sobre el África Sudoccidental.

356. La delegación soviética consideró, además, que la administración directa del Territorio del África Sudoccidental por las Naciones Unidas no sería la solución más afortunada y entrañaría peligros para el movimiento de liberación nacional de la población del Territorio. Aunque la delegación soviética votaría a favor de la totalidad de las recomendaciones, deseaba reservar su posición acerca de las relativas al ejercicio de la administración directa del Territorio por las Naciones Unidas, que, a su juicio, podrían crear graves dificultades con respecto a la concesión de la independencia al Territorio. Lo que se recomendaba en efecto era que el África Sudoccidental fuese sometida a fideicomiso, aun cuando éste fuese administrado por las Naciones Unidas en conjunto y no por uno o varios Estados. La historia había demostrado que, incluso cuando las Naciones Unidas adoptaban decisiones políticas positivas, los mecanismos de la Organización, todavía dominados por representantes de las Potencias occidentales, aplicaban a menudo estas decisiones en beneficio de las fuerzas imperialistas y colonialistas en vez de en interés de los pueblos. Un ejemplo notable era la operación de las Naciones Unidas en el Congo que no sólo no pudo poner término a la intervención colonialista en los asuntos internos de ese país, sino que dio origen a graves dificultades dentro de las propias Naciones Unidas.

357. Su delegación estimaba que los preparativos y la celebración de elecciones en el África Sudoccidental debían ser supervisados por la Organización de la Unidad Africana, que podría asegurar el traspaso de po-

deres a la población del Territorio y garantizar así una auténtica independencia. Su delegación estimaba también que las recomendaciones deberían pedir la participación de la OUA en la aplicación de las medidas que el Consejo de Seguridad debía adoptar contra Sudáfrica en caso de que este país se negase a cumplir las decisiones de las Naciones Unidas sobre el África Sudoccidental.

358. La delegación soviética esperaba que las recomendaciones que el Comité Especial presentase a la Asamblea General tendrían debidamente en cuenta estas observaciones.

359. El representante del Irán dijo que su delegación apoyaba totalmente las recomendaciones del Subcomité. Convenía en que la cuestión de Sudáfrica era una cuestión política y en que, por ello, habría que adoptar medidas políticas para resolverla. Los medios, los procedimientos y las presiones de orden político serían los medios más efectivos de poner término al desafío de Sudáfrica durante 20 años a las recomendaciones de la Asamblea General y a su desprecio por la Carta de las Naciones Unidas.

360. El representante del Reino Unido dijo que su delegación se reservaría sus comentarios hasta que se examinase la cuestión del África Sudoccidental en el próximo período de sesiones de la Asamblea General. Se reservó plenamente su posición sobre el informe y sobre sus conclusiones y recomendaciones.

361. El representante del Afganistán señaló que su delegación, tras un examen muy atento del informe, estimaba que la situación en que se encontraba el Territorio del África Sudoccidental ponía muy seriamente en juego la responsabilidad de las Naciones Unidas. Después de veinte años de debates no se había hecho ningún progreso en el problema del África Sudoccidental y el Gobierno de Sudáfrica no había tomado medida alguna para aplicar las resoluciones de la Asamblea General. En consecuencia, las Naciones Unidas debían hallar rápidamente el medio de poner fin al mandato de Sudáfrica y ayudar al pueblo del Territorio a obtener la independencia y la libertad por la vía de la justicia y del derecho a la libre determinación. La solución del problema tendría que armonizar con los derechos humanos fundamentales y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La delegación del Afganistán apoyaba totalmente las conclusiones y recomendaciones del informe del Subcomité.

362. El representante de Italia manifestó que su delegación aprobaba enteramente la mayoría de las conclusiones formuladas por el Subcomité y, en especial, las que figuraban en los párrafos 27 a 30 del informe. Además, los párrafos 11 a 15, que reproducían extractos de las más recientes opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de su fallo del 21 de diciembre de 1962, eran de gran valor, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Dichas opiniones consultivas y el fallo de 1962 no dejaban duda alguna con respecto a la índole jurídica de la cuestión. Como el fallo dictado por la Corte el 18 de julio de 1966 no las había modificado en absoluto, las citadas opiniones consultivas conservaban toda su validez.

363. La delegación de Italia no subestimaba la gravedad de la situación y compartía la preocupación de los miembros del Subcomité, y ciertamente las de todos los miembros del Comité Especial. Sin embargo, dado

que el problema del Africa Sudoccidental sería analizado a fondo durante el siguiente período de sesiones de la Asamblea General, la delegación de Italia deseaba reservar su posición hasta ese momento, aunque no se oponía a la aprobación del informe.

364. En el deseo de facilitar el debate de la Asamblea General sobre esa cuestión, sugería que se pidiera al Departamento de Asuntos Jurídicos que hiciera un resumen del fallo del 18 de julio de 1966 y de los anexos y las actas que lo acompañaban, en la medida en que fueran pertinentes. Indudablemente, el texto del fallo debía contener algunas ideas y sugerencias que podrían facilitar los debates de la Asamblea General y confirmarían el hecho de que tal fallo, lejos de invalidar las opiniones consultivas anteriormente emitidas por la Corte, las reforzaban.

365. El representante de los Estados Unidos de América dijo que si se sometía a votación el informe del Subcomité, su delegación se abstendría y que si se propusiera que se lo aprobara sin votación habría de reservar su posición.

366. La Asamblea General tendría que adoptar decisiones importantes acerca de las nuevas medidas que sería menester tomar para resolver este tan difícil problema. En el ínterin, la delegación de los Estados Unidos continuaría estudiando los aspectos jurídicos y políticos de la cuestión, pero reservando por el momento su posición. El Gobierno de los Estados Unidos se había comprometido públicamente a respetar las opiniones emitidas por la Corte Internacional de Justicia en lo tocante a la situación jurídica del Territorio y a las obligaciones que recaían sobre Sudáfrica en virtud del mandato. Los Estados Unidos no consideraban que la política de apartheid favoreciera el progreso social ni el bienestar moral y material de los habitantes del Territorio.

367. El representante de Chile dijo que los acontecimientos de los últimos veinte años inducían a su delegación a pensar que desde el punto de vista político y moral la solución adecuada consistiría en revocar el mandato que la Sociedad de las Naciones había confiado a Sudáfrica. Sin embargo, los aspectos jurídicos de la cuestión eran verdaderamente complejos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile seguía estudiándolos. Por tal motivo, la delegación chilena se veía obligada a reservar su posición y su opinión sobre el problema, y también sobre las diversas consecuencias que derivaban de las conclusiones formuladas en el informe del Subcomité. En general, aprobaba el informe y durante el debate en la Asamblea General tendría oportunidad de contribuir positivamente a los esfuerzos de la comunidad internacional por resolver tan delicado problema.

368. El representante del Uruguay dijo que el informe del Subcomité aclaraba cierto número de puntos fundamentales. La delegación del Uruguay estaba enteramente dispuesta a votar afirmativamente sobre el fondo de la cuestión, como lo había hecho siempre durante los últimos veinte años.

369. Sin embargo, compartía las preocupaciones de otras delegaciones, especialmente en lo que respectaba a la recomendación del apartado iii) del inciso c) del párrafo 32 del informe, según la cual: "Las Naciones Unidas deben decidir ejercitar el derecho de reversión del mandato a su poder." Si se consideraban los aspectos morales y políticos de la cuestión, parecería que ésta

fuera la única solución apropiada. No obstante, desde el punto de vista estrictamente jurídico esa recomendación planteaba ciertos problemas fundamentales que, si no se obraba con cautela, podrían crear un precedente enojoso. La delegación del Uruguay estimaba, por otra parte, que quizás el informe no debiera presentar a la Asamblea General una conclusión tan categórica. Por lo tanto, se reservaba el derecho de indicar su posición definitiva en la Asamblea General, una vez que tuviera en su poder todos los datos pertinentes.

370. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, el representante del Uruguay deseaba además hacer una advertencia con respecto al párrafo 33, que se refería al Capítulo VII de la Carta. Ese Capítulo versaba sobre asuntos de la competencia del Consejo de Seguridad. En consecuencia, su delegación se abstendría si este párrafo fuera sometido a votación, por la sencilla razón de que no quería predeterminedar la posición que adoptaría ulteriormente al respecto.

371. Aparte de estas reservas, la delegación del Uruguay apoyaba totalmente las demás conclusiones formuladas en el informe.

372. El representante de Sierra Leona manifestó que su delegación apoyaría en su totalidad el informe del Subcomité, que constituía a su juicio un estudio muy completo de la cuestión.

373. El representante de Etiopía dijo que desearía, como Presidente del Subcomité del Africa Sudoccidental, hacer aclaraciones sobre ciertos puntos que a su parecer, y a la luz de sus conversaciones con otros representantes dentro y fuera del Comité Especial, podrían suscitar equívocos. Se trataba, desde luego, del párrafo 32 del informe y de las recomendaciones que contenía. Ante todo, contra lo que algunos representantes daban a entender, el Subcomité no había tratado de rechazar ni de pasar por alto el aspecto jurídico del problema ni la muy útil recopilación de jurisprudencia relativa a la cuestión del Africa Sudoccidental. Era evidente que toda decisión política debería fundarse en una base jurídica, que por fortuna existía. El grupo afroasiático, en su totalidad, estaba absolutamente convencido de la validez de los argumentos jurídicos que sostenía. Cuando seis años antes Etiopía y Liberia sometieron el caso del Africa Sudoccidental a la Corte Internacional de Justicia en nombre del grupo africano, no lo hicieron por cierto para establecer una base jurídica, sino para reforzarla. El hecho de que no hubieran obtenido el éxito esperado no quitaba ninguna validez a los argumentos jurídicos que expusieron para litigar en el caso del Africa Sudoccidental.

374. Aunque estaban convencidos de que la lucha debía ser librada sobre un terreno político, no por ello los miembros del grupo africano eran menos respetuosos de la legalidad. Como en el pasado, continuarían adoptando en el porvenir la línea de conducta más compatible con los aspectos jurídicos de la cuestión. La propia Corte Internacional de Justicia, que últimamente parecía haber eludido sus responsabilidades, había dado un fallo y opiniones consultivas que constituían la base jurídica sobre la que debía fundarse toda acción política. Por consiguiente, sería injusto pensar que el Subcomité, cuando preparó su informe, no había tenido en cuenta la situación jurídica.

375. Al parecer, también se había producido un equívoco respecto de la cuestión de la revocación del mandato. Algunas delegaciones, al igual que ciertos

observadores, parecían haber entendido que esta revocación significaría la anulación del mandato. Ahora bien, no se trataba de anular el acuerdo internacional que regía el estatuto del África Sudoccidental. Esta era y debía seguir siendo un territorio internacional hasta el momento en que obtuviera la independencia. El informe no recomendaba que se adoptaran medidas que condujeran a convertir al África Sudoccidental en una especie de "tierra de nadie" en la que cualquiera pudiera verse tentado a instalarse. Esto no era, de ningún modo, lo que proponía el Subcomité cuando declaraba que era preciso relevar de su mandato a Sudáfrica. Si el informe del Subcomité no era bastante claro sobre este punto, el Comité Especial estaba en absoluta libertad de criticarlo y de mejorar el texto.

376. El hecho era que, ante la obstinada negativa de Sudáfrica a cumplir sus obligaciones, y dado que al cabo de seis años de aguardar una solución jurídica la cuestión seguía sin resolverse, el Subcomité creía que había llegado la hora de pedir que actuara la Asamblea General.

377. Durante seis años las Naciones Unidas no habían querido intervenir a favor de la población del África Sudoccidental por temor a prejuzgar la cuestión sometida a la Corte Internacional de Justicia, y ésta declaraba ahora, so pretexto de que los demandantes no habían podido probar la existencia de un derecho o interés jurídico, que no podía pronunciarse. Ante esta situación ridícula, al Subcomité no le quedaba otro recurso que apelar de ello a la Asamblea General. Una de las partes contratantes, Sudáfrica, no había respetado sus compromisos, y la otra, a saber, las Naciones Unidas, debe pronunciarse ahora sobre la validez del contrato. A juzgar por las últimas noticias, no parecía que el reciente cambio gubernamental en Sudáfrica autorizara a abrigar la menor esperanza de que mejorara la situación. Cabía preguntarse si las Naciones Unidas habrían de esperar a que Sudáfrica diera curso a su intención de anexarse el Territorio, para lo cual le serviría de gran estímulo el último fallo de la Corte. Era imposible imaginar que las Naciones Unidas pudieran justificar su existencia y sus responsabilidades si no adoptaban inmediatamente las medidas que se imponían en el plano internacional.

378. El representante del Uruguay dijo que si bien no ponía en duda la calidad de la labor del Subcomité, lamentaba que las conclusiones formuladas en su informe no tuvieran el apoyo de una argumentación jurídica sólida. La delegación del Uruguay recordaba que durante el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General había apoyado la propuesta hecha por Venezuela de proceder a un estudio jurídico de la cuestión. Aunque no ignoraba los sufrimientos de una población oprimida, estimaba que sería difícil justificar la revocación del mandato de Sudáfrica ante la Asamblea General si se carecía de esa necesaria argumentación jurídica. No dudaba de que la posición expuesta por el representante de Etiopía se justificaría desde un punto de vista jurídico, pero deseaba que dicha posición estuviera apoyada más sólidamente. Mientras tanto, la delegación del Uruguay continuaría el estudio de la cuestión, a fin de poder preparar la posición que habría de adoptar en el debate que tendría lugar en la Asamblea General.

379. El representante de Dinamarca dijo que, puesto que su Gobierno todavía no había concluido el examen de las cuestiones jurídicas y políticas que entra-

ñaba el informe, su delegación debía formular una reserva provisional acerca del apartado iii) del inciso c) del párrafo 32 y el párrafo 33; por tanto, su posición seguía siendo la que se indicaba en el párrafo 35 del informe. Salvo esta reserva, su delegación no tenía objeción que oponer a la aprobación del informe.

F. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

380. En su 467a. sesión, celebrada el 15 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité del África Sudoccidental¹⁴ por consenso, entendiéndose que todas las reservas expresadas por los miembros se reflejarían en las actas.

G. EXAMEN DE PETICIONES

381. Las peticiones relativas al África Sudoccidental, recibidas y distribuidas por el Comité Especial, figuran en los párrafos 73 y 328 *supra*. Estas peticiones se refieren *inter alia* al establecimiento de bases militares en el Territorio, a la situación de los refugiados procedentes del África Sudoccidental, a las organizaciones políticas y al fusilamiento, detención y deportación de los dirigentes políticos en el Territorio, la expulsión de los africanos de zonas urbanas y a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Odendaal, a la situación en Ovambolandia, a las condiciones laborales en el Territorio y al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 18 de julio de 1966, y al futuro del África Sudoccidental.

382. En el inciso a) del párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución 1899 (XVIII) aprobada por la Asamblea General se pedía al Comité Especial que continuara sus esfuerzos para desempeñar la misión que le había asignado la resolución 1805 (XVII). En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 1805 (XVII) la Asamblea General pedía al Comité Especial "que realice, *mutatis mutandis*, las tareas asignadas por la resolución 1702 (XVI) a la Comisión Especial para el África Sudoccidental teniendo en cuenta las responsabilidades especiales de las Naciones Unidas con respecto al Territorio del África Sudoccidental...". Una de las funciones asignadas al Comité Especial era la de examinar las peticiones relativas al África Sudoccidental.

383. Durante 1966, el Comité Especial examinó 44 peticiones relativas al África Sudoccidental que tomó en cuenta mientras examinaba la situación existente.

384. Teniendo en cuenta las responsabilidades especiales de las Naciones Unidas con respecto al territorio del África Sudoccidental el Comité Especial, a recomendación del Subcomité de Peticiones, decidió en su 468a. sesión celebrada el 19 de septiembre de 1966 recomendar a la Asamblea General que adoptara el siguiente proyecto de resolución sobre las peticiones relativas al África Sudoccidental:

"PROYECTO DE RESOLUCIÓN RECOMENDADO A LA ASAMBLEA GENERAL POR EL COMITÉ ESPECIAL

"Peticiones relativas al África Sudoccidental

"La Asamblea General,

"Teniendo en cuenta las responsabilidades especiales de las Naciones Unidas con respecto al África Sudoccidental,

¹⁴ Las conclusiones y recomendaciones de ese informe se reproducen en los párrafos 27 a 34 del apéndice.

"Tomando nota de que el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, había recibido y examinado 44 peticiones relativas al Africa Sudoccidental en conformidad con el párrafo 3 de la resolución 1805 (XVII) aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1962 y el inciso a) del párrafo 8 de la resolución 1899 (XVIII) aprobada por la Asamblea General el 13 de noviembre de 1963,

"Tomando nota además de que esas peticiones se refieren *inter alia* al establecimiento de bases militares en el Territorio, a la situación de los refugiados procedentes del Africa Sudoccidental, a las organizaciones políticas, al fusilamiento, detención y deportación de los dirigentes políticos en el Territorio, a la expulsión de los africanos de las zonas urbanas, a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Odendaal, a la situación en Ovambolandia, a las condiciones laborales en el Territorio, al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 18 de julio de 1966, y al futuro del Africa Sudoccidental,

"1. Toma nota de que el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales había tomado en cuenta dichas peticiones al examinar la cuestión relativa al Africa Sudoccidental;

"2. Señala a la atención de los peticionarios interesados el informe del Comité Especial relativo al Africa Sudoccidental, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones sobre la cuestión del Africa Sudoccidental, así como los informes del Secretario General relativos a dicho Territorio."

APENDICE

[A/AC.109/L.325]

Informe del Subcomité del Africa Sudoccidental

Relator: Sr. C. R. Gharekhan (India)

INTRODUCCIÓN

1. En virtud del párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución aprobada en su 439a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1966, sobre la cuestión del Africa Sudoccidental (A/AC.109/177), el Comité Especial decidió constituir "un subcomité que haga un estudio detenido de la situación y, entre otras cosas, recomiende una fecha próxima para la independencia del Territorio".

2. En su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, el Comité Especial decidió, a propuesta de su Presidente, que el Subcomité del Africa Sudoccidental estuviera integrado por la Costa de Marfil, Dinamarca, Etiopía, la India, Polonia, Túnez y Venezuela.

3. En su primera sesión, celebrada el 21 de julio de 1966, el Subcomité eligió por unanimidad a Lij Endelkachew Makonnen (Etiopía) como Presidente y al Sr. C. R. Gharekhan (India) como Relator.

4. En su declaración inaugural pronunciada en dicha sesión, el Sr. John W. S. Malecela, Presidente interino del Comité Especial, subrayó que los Estados de Africa estaban determinados a liberar al Africa Sudoccidental del colonialismo y del apartheid. El fracaso de sus esfuerzos por resolver de manera pacífica el problema del Africa Sudoccidental mediante un recurso a la Corte Internacional de Justicia confirmaba no sólo que el problema era más político que jurídico, sino también que era menester volver a considerar la composición de mu-

chos órganos de las Naciones Unidas a la luz de las nuevas circunstancias. El problema del Africa Sudoccidental, a pesar de una complejidad debida en gran parte al apoyo que prestaban a Sudáfrica las Potencias coloniales con intereses en la región, era esencialmente sencillo: se trataba de la descolonización del Territorio. El Presidente interino manifestó la esperanza de que el Subcomité analizaría todos los factores pertinentes y recomendaría que se tomaran las medidas más positivas y concretas para liberar el Territorio del Africa Sudoccidental y garantizar a su población africana el derecho a la libertad y la independencia.

5. El Subcomité celebró tres sesiones más los días 12 y 19 de agosto y 8 de septiembre de 1966.

6. Al estudiar la situación, el Subcomité utilizó como pauta las recomendaciones de la Asamblea General y el Comité Especial sobre la cuestión del Africa Sudoccidental. El Subcomité tuvo en cuenta también las opiniones consultivas emitidas el 11 de julio de 1950, el 7 de junio de 1955 y el 1° de junio de 1956, así como los fallos pronunciados el 21 de diciembre de 1962 y el 18 de julio de 1966 por la Corte Internacional de Justicia. Además, el Subcomité tuvo presentes las comunicaciones de los siguientes Estados Miembros relativas al fallo pronunciado por la Corte de 18 de julio de 1966: Bulgaria (A/6372), la Costa de Marfil (A/6371), la India (A/6250), Kenia (A/6387), Mongolia (A/6407), Nigeria (A/6346), el Pakistán (A/6388) y Polonia (A/6402).

7. El Subcomité señaló que, en una carta de fecha 3 de agosto de 1966 dirigida al Secretario General (A/6386), los representantes de treinta y cinco Estados Miembros pidieron que la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, examinara con carácter prioritario la cuestión del Africa Sudoccidental.

EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL SUBCOMITÉ

8. Ciertos miembros del Subcomité manifestaron la opinión de que el fallo de la Corte de 18 de julio de 1966, al excluir la posibilidad de resolver el problema del Africa Sudoccidental por medios jurídicos, había impuesto a la Asamblea General la grave responsabilidad de tener que resolverlo mediante una acción política.

9. Algunos miembros del Subcomité lamentaron que la Corte Internacional de Justicia se hubiera limitado a decidir que procedía rechazar las solicitudes de Etiopía y Liberia, aduciendo que no cabía considerar que dichos países hubieran establecido ningún derecho o interés legal respecto del objeto de sus solicitudes; como consecuencia, la Corte no se había pronunciado sobre ninguno de los problemas de fondo que se le había sometido.

10. Al mismo tiempo, se reconoció unánimemente que, en cuanto a la existencia del Mandato y de las obligaciones que en su virtud asumía Sudáfrica, seguían siendo válidas las opiniones consultivas anteriores y el fallo pronunciado por la Corte en 1962.

11. Respecto de la situación jurídica del Territorio, en su opinión consultiva emitida el 11 de julio de 1950, la Corte estimó por unanimidad:

"que Africa Sudoccidental es un Territorio sometido a Mandato internacional asumido por la Unión Sudafricana el 17 de diciembre de 1920"^a; y

"que la Unión Sudafricana, actuando por sí sola, no tiene competencia para modificar la situación jurídica internacional del Territorio del Africa Sudoccidental."^b

12. En lo que respecta a las obligaciones de Sudáfrica conforme al Mandato, la Corte expresó en 1950 la opinión siguiente:

"que la Unión Sudafricana continúa sometida a las obligaciones internacionales enunciadas en el Artículo 22 del Pacto

^a *International status of South-West Africa, Advisory Opinion: I. C. J. Reports 1950*, pág. 143.

^b *Ibid.*, pág. 144.

de la Sociedad de las Naciones y en el Mandato para el Africa Sudoccidental, así como a la obligación de transmitir las peticiones de los habitantes de ese Territorio; y que las funciones de control deben ser ejercidas por las Naciones Unidas, a las cuales se deben presentar los informes anuales y las peticiones; y que la referencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional debe ser reemplazada por una referencia a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 7 del Mandato y el Artículo 37 del Estatuto de la Corte¹³.

13. Los miembros observaron asimismo que la opinión consultiva de 11 de julio de 1950 había sido reiterada por la Corte en sus opiniones consultivas de 7 de junio de 1955 y de 1° de junio de 1956 y en su fallo de 21 de diciembre de 1962.

14. En su opinión consultiva de 1° de junio de 1956, la propia Corte interpretó el sentido general de su opinión de 1950 en la forma siguiente:

"El sentido general de la opinión expresada por la Corte el 11 de julio de 1950 es que el propósito primordial de que la Asamblea General de las Naciones Unidas asumiera las funciones de control con respecto al Mandato para el Africa Sudoccidental, que antes ejercía el Consejo de la Sociedad de las Naciones, era defender la sagrada misión de civilización mediante el mantenimiento del control internacional efectivo de la administración del Territorio bajo mandato"¹⁴.

15. Nuevamente, en su fallo de 21 de diciembre de 1962, la Corte Internacional, después de citar una parte de su opinión de 1950 relativa a la obligación de Sudáfrica de aceptar la supervisión internacional de su administración del Territorio, declaró:

"Las conclusiones de la Corte sobre la obligación del Gobierno de la Unión de someterse a supervisión internacional son, por lo tanto, evidentes. Es más, excluir las obligaciones relacionadas con el Mandato equivaldría a excluir la esencia misma del Mandato."¹⁵

16. A juicio de los miembros había quedado establecido en forma indudable que Sudáfrica no había cumplido y ni siquiera había reconocido las obligaciones que le incumbían conforme al Mandato de aceptar la autoridad de las Naciones Unidas en materia de control y de promover en la medida de sus posibilidades el bienestar material y moral y el progreso social de los habitantes de Africa Sudoccidental. Además de hacer caso omiso de las reiteradas condenas del sistema de apartheid pronunciadas por la Asamblea General, Sudáfrica había continuado aplicando y extendiendo este sistema al Africa Sudoccidental, en violación de las obligaciones contraídas conforme al Mandato y a la Carta.

17. Los miembros observaron asimismo que, lejos de cooperar con las Naciones Unidas en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Sudáfrica, contraviniendo diversas resoluciones de la Asamblea General, había intentado constantemente anexarse Africa Sudoccidental. Ya en 1946, durante el primer período de sesiones de la Asamblea General, Sudáfrica declaró su intención de anexarse el Territorio, que fue rechazada. En 1957 propuso la partición del Territorio de manera que una parte se pusiera en fideicomiso y la parte más rica, que contiene los depósitos de diamantes y otros recursos importantes del Territorio, se anexase a la Unión. Esta propuesta también fue rechazada por la Asamblea General.

18. A pesar de la decidida y constante oposición a la anexión manifestada por la comunidad mundial, Sudáfrica está preparando actualmente la partición del Territorio en zonas

raciales y étnicas separadas, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión Odendaal, cuya aplicación destruiría la integridad territorial de Africa Sudoccidental, alteraría la situación jurídica del Territorio y significaría en realidad su anexión por Sudáfrica. Estas medidas constituirían la más flagrante violación a la resolución 2074 (XX) de la Asamblea General de 17 de diciembre de 1965.

19. Un total de setenta y tres resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante un lapso de veinte años no habían tenido por resultado que Sudáfrica respetara sus obligaciones en su administración de Africa Sudoccidental. Por el contrario, Sudáfrica había continuado oponiéndose a dichas resoluciones y mantenía su negativa a cooperar con las Naciones Unidas en sus esfuerzos por permitir al pueblo del Territorio el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

20. En tales circunstancias varios miembros del Subcomité consideraban indispensable que la Asamblea General tomase medidas inmediatas y eficaces para resolver la cuestión; se insistió en que si se permitía que continuase dicha situación, el prestigio y la autoridad de las Naciones Unidas resultarían afectados. Se consideró también que cualquier demora tendría por consecuencia la consolidación de la posición de Sudáfrica en el Africa Sudoccidental.

21. Como quiera que las Naciones Unidas habían asumido una grave y especial responsabilidad en relación con Africa Sudoccidental, incumbía a la Organización poner pronto término al régimen sudafricano en Africa Sudoccidental y hacer que el pueblo del Territorio disfrute sin demora de sus derechos inalienables a la libertad y a la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

22. Algunos miembros señalaron que en la resolución 1702 (XVI) de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1961, se esbozaban algunos de los objetivos que habían de alcanzarse para la rápida aplicación de la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960. En virtud de la resolución 1805 (XVIII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, se asignó al Comité Especial la misión de procurar la consecución de tales objetivos. En opinión de algunos miembros del Subcomité, había pocas esperanzas de que puedan conseguirse estos objetivos mientras el Gobierno de Sudáfrica ejerciera una autoridad incontrolada sobre el Territorio.

23. En consecuencia, algunos miembros propusieron que la Asamblea General diera por terminado con carácter inmediato el Mandato de Sudáfrica. A este respecto, se sugirió que las Naciones Unidas asumieran ellas mismas la administración del Territorio hasta que la población de Africa Sudoccidental estuviera en situación de asumir el control. Otra de las sugerencias consistió en que la terminación del Mandato fuera acompañada de la prestación de toda la ayuda posible a la población de Africa Sudoccidental y la imposición de un embargo sobre todo comercio con Sudáfrica.

24. Algunos miembros propusieron también que la Asamblea garantizase que Africa Sudoccidental no será anexada por Sudáfrica y que declarara nula e inválida cualquier acción de Sudáfrica que no se ajustara a las resoluciones de las Naciones Unidas.

25. Se sugirió asimismo que se adoptaran medidas para procurar el desmantelamiento de todas las bases militares sitas en el Territorio y poner fin a la militarización de la región; hacer cesar la facilitación de equipo y adiestramiento militares a Sudáfrica, y retirar las licencias concedidas a Sudáfrica para la fabricación de armas y vehículos militares. Se señaló a este propósito que era lamentable que ciertas Potencias occidentales no hubiesen tomado medidas para aplicar las recomendaciones de la Asamblea General en las que se instaba a los Estados que se abstuvieran de suministrar armas o equipo militar a Sudáfrica y se guardasen de tomar alguna medida que pudiera entorpecer la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Africa Sudoccidental.

26. Se sugirió que se adoptaran, además, las medidas pertinentes para asegurar la estricta observancia del embargo sobre el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo

¹³ *Ibid.*, pág. 143.

¹⁴ *Admissibility of hearings of petitioners by the Committee on South West Africa, Advisory Opinion of June 1st. 1956: I. C. J. Reports 1956, pág. 28.*

¹⁵ *South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment of 21 December 1962: I. C. J. Reports 1962, pág. 334.*

a Sudáfrica y para imponer un embargo sobre las exportaciones de otros determinados productos a ese país, especialmente caucho, ciertos metales y productos químicos, madera de construcción, algodón y otras fibras textiles, equipo industrial, motores y piezas de repuesto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

27. El Subcomité, al propio tiempo que manifiesta su grave preocupación por la situación reinante en el Territorio, a raíz del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia el 18 de julio de 1966, abriga el convencimiento de que han de adoptarse medidas urgentes y positivas para impedir una grave amenaza a la paz de aquella zona o su quebrantamiento.

28. El Subcomité estudió detenidamente dicho fallo sobre el caso de África Sudoccidental, y especialmente la parte resolutive del mismo en que se desestima la acción de los dos países demandantes, Etiopía y Liberia, por la razón de procedimiento que no han probado tener algún derecho o interés jurídico en el asunto. El Subcomité lamenta profundamente que la Corte haya decidido desestimar el caso sin entrar a juzgar el fondo de la cuestión; se expresaron temores de que el fallo de la Corte pueda tener desastrosas consecuencias para el establecimiento y acatamiento de una conducta propiamente internacional en lo futuro.

29. Al propio tiempo, el Subcomité sustenta la opinión de que ese fallo no invalida las anteriores opiniones consultivas, de fondo, emitidas por la Corte, que no han dejado lugar a duda alguna en cuanto a las obligaciones de Sudáfrica y a las facultades fiscalizadoras de las Naciones Unidas.

30. El Subcomité sostiene unánimemente la opinión de que el problema de África Sudoccidental es una cuestión política y colonial, cuya solución debe buscarse atendiendo a los derechos humanos fundamentales y a los principios de la Carta, en especial los que se enumeran en el Artículo 73, y la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960. El hecho de que las cláusulas de dicha resolución tiene plena aplicabilidad a África Sudoccidental, territorio no autónomo, ha sido ya reconocido en múltiples resoluciones de la Asamblea General. La República de Sudáfrica se ha negado insistentemente a acatar y aplicar las resoluciones de la Asamblea General. Es más, ha extendido sus inhumanas políticas de discriminación racial al Territorio de África Sudoccidental con clara contravención de las obligaciones que le incumben en virtud del sagrado fideicomiso que le fue confiado en 1920.

31. El Subcomité cree resueltamente que las Naciones Unidas deben adoptar medidas inmediatas y eficaces con arreglo a sus responsabilidades básicas, al objeto de proteger los derechos fundamentales de la población de África Sudoccidental. La meta de esas medidas ha de ser que la población del Territorio pueda ejercer su derecho a la libre determinación en una atmósfera libre y sin restricciones.

32. Vistas estas consideraciones, el Subcomité recomienda el siguiente plan de acción:

a) Que se reafirme que las disposiciones de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, son plenamente aplicables a África Sudoccidental, territorio no autónomo, como lo ha reconocido la Asamblea General en varias resoluciones.

b) Que se afirme en términos inequívocos el derecho inalienable de la población de África Sudoccidental a la libertad e independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, derecho también reconocido por

la resolución 2074 (XX), de 17 de diciembre de 1965, y otras resoluciones anteriores.

c) Que se brinde a la población del Territorio la oportunidad de ejercitar su derecho a la libre determinación lo antes posible, ya que sólo en esa forma pueden protegerse sus legítimos derechos e intereses. A ese fin, se recomiendan las siguientes medidas:

- i) Las Naciones Unidas deben recordar que han hecho todo lo posible para resolver el problema mediante negociaciones con Sudáfrica;
- ii) Las Naciones Unidas deben hacer constar una vez más que Sudáfrica se ha negado insistentemente a acatar las resoluciones de la Asamblea General relativas a África Sudoccidental;
- iii) Las Naciones Unidas deben decidir ejercitar el derecho de reversión del Mandato a su poder;
- iv) Deben declararse extintos los derechos y las responsabilidades de Sudáfrica como Potencia mandataria respecto de África Sudoccidental, yendo acompañada esta medida por la asunción por parte de las Naciones Unidas de la responsabilidad de administración directa del Territorio y por la creación de un sistema adecuado a tal efecto;
- v) Con el fin de que las Naciones Unidas puedan adoptar las disposiciones pertinentes para la administración del Territorio, debe pedirse al Secretario General que se lleve a cabo un estudio completo de los requisitos de orden administrativo, económico, de personal y de otros tipos necesarios para tal administración directa; debe solicitarse del Secretario General que presente sus conclusiones lo antes posible;
- vi) Una vez asumida la responsabilidad directa por las Naciones Unidas deben hacerse los arreglos del caso para celebrar elecciones con arreglo al principio del sufragio universal de los adultos para que la población pueda decidir, con arreglo a sus deseos libremente expresados, el tipo de gobierno que prefiera;
- vii) El Territorio debe obtener la plena independencia después de las elecciones y de la formación de un gobierno como se dispone en el inciso vi) *supra*.

33. En caso de que Sudáfrica se resista a la ejecución de las medidas señaladas, el Subcomité es de opinión que se tomen medidas eficaces en contra de Sudáfrica, incluidas las que se prevén en el Capítulo VII de la Carta.

34. El Subcomité abriga el convencimiento de que la ejecución de las recomendaciones mencionadas acelerará el logro de la independencia del África Sudoccidental y de su legítimo lugar dentro de la comunidad de las naciones. El Subcomité expresa la ardiente esperanza de que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, conscientes de sus responsabilidades conforme a la Carta, prestarán su más decidida cooperación para respaldar y aplicar las citadas recomendaciones.

APROBACIÓN DEL INFORME

35. El Subcomité aprobó este informe por unanimidad en su cuarta reunión celebrada el 8 de septiembre de 1966. El representante de Dinamarca manifestó que, como su Gobierno no había terminado aún el examen de los aspectos jurídicos y políticos de la cuestión, su delegación debía expresar una reserva provisional con respecto al apartado iii) del inciso c) del párrafo 32 y al párrafo 33.

CAPÍTULO V

TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA

PARTE I*

A. MEDIDAS ADOPTADAS EN 1965 POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD, LA ASAMBLEA GENERAL Y EL COMITÉ ESPECIAL

1. El Comité Especial examinó la cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa en mayo y junio de 1965 durante su visita al Africa y nuevamente en octubre en la Sede.

2. Durante la primera parte de su examen el Comité Especial escuchó a varios peticionarios procedentes de Angola, Mozambique y Guinea bajo administración portuguesa. Estudió también la situación de los refugiados procedentes de esos Territorios y las medidas tomadas para prestarles asistencia médica y de otro carácter por conducto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de los organismos especializados interesados, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Comité en 1964 (A/5800/Rev.1¹, cap. V, párr. 352).

3. El 10 de junio de 1965 el Comité Especial aprobó una resolución (A/6000/Rev.1², cap. V, párr. 415) por la que reafirmaba el derecho de la población de los Territorios africanos bajo administración portuguesa a la libre determinación y la independencia, y reconocía la legitimidad de su lucha por conquistar los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y formulaba un llamamiento a todos los Estados pidiéndoles que prestasen a las poblaciones africanas de tales Territorios el apoyo moral y material necesario para la restitución de sus derechos inalienables. Pidió también al Alto Comisionado para los Refugiados y a los organismos especializados de las Naciones Unidas que prestasen mayor ayuda a los refugiados procedentes de dichos Territorios. El Comité Especial señaló urgentemente a la atención del Consejo de Seguridad el continuo empeoramiento de la situación en los Territorios bajo administración portuguesa así como las consecuencias de las amenazas hechas por Portugal contra los Estados africanos independientes limítrofes con sus colonias.

4. El 17 de junio de 1965 el Secretario General transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el texto de la resolución así como las actas de las sesiones celebradas por el Comité sobre esta materia³.

5. Al continuar sus estudios sobre los Territorios portugueses en el mes de octubre el Comité Especial tuvo ante sí un informe presentado por el Subcomité I. Este informe había sido preparado de conformidad con una resolución aprobada por el Comité Especial

el 3 de julio de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 352) por el cual este último, entre otras cosas, había pedido al Subcomité que, con asistencia del Secretario General, examinase las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que estaban obstaculizando la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los Territorios bajo administración portuguesa. El 28 de octubre el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité I e hizo suyas sus observaciones y conclusiones. El Comité Especial se ocupa de este asunto en su informe a la Asamblea General (A/6000/Rev.1, cap. V) al cual agregó como apéndice el informe del Subcomité I, así como los dos documentos básicos preparados por la Secretaría para el Subcomité I, sobre la minería, y la concesión, ocupación y colonización de tierras en los Territorios bajo administración portuguesa.

6. Por carta del 11 de julio de 1963, los representantes de 32 Estados Miembros pidieron al Consejo de Seguridad que estudiase la cuestión relativa a la situación en los Territorios bajo administración portuguesa⁴. El Consejo de Seguridad estudió esta cuestión y el 23 de noviembre de 1965 aprobó la resolución 218 (1965). Recordando la resolución de la Asamblea General 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, el Consejo afirmó "que la situación resultante de la política portuguesa, en lo que respecta tanto a la población africana de sus colonias como a los Estados limítrofes, perturba seriamente la paz y la seguridad internacionales". Una vez más, deploró la negativa del Gobierno de Portugal a cumplir las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y a reconocer el derecho de los pueblos de los Territorios a la libre determinación. Reafirmó su urgente requerimiento a Portugal de que tomase medidas para conceder la independencia a todos los Territorios bajo su administración, conforme a las aspiraciones del pueblo. El Consejo pidió nuevamente a todos los Estados que se abstuviesen de ofrecer al Gobierno de Portugal cualquier asistencia que lo pusiese en condiciones de continuar la represión que ejercía sobre los pueblos de los Territorios y tomasen las medidas necesarias para evitar la venta y el suministro de armas y equipo militar al Gobierno portugués para ese efecto, incluso la venta y entrega de equipos y materiales para fabricar y mantener armas y municiones para ser usadas en los Territorios. Pidió a todos los Estados que informasen al Secretario General acerca de las medidas que hubieran iniciado para aplicar esta disposición.

7. Como lo hizo en su resolución de 1963, el Consejo pidió al Secretario General que asegurase la aplicación de las disposiciones de la resolución, prestase la ayuda que considerase necesaria e informase al Consejo de Seguridad a más tardar el 30 de junio de 1966.

8. La Cuarta Comisión de la Asamblea General examinó la cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa tomando como base el informe del Comité Especial (A/6000/Rev.1, cap. V) y dos in-

* Publicada anteriormente con la signatura A/6300/Add.3 (parte I) y Corr.1.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² Ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1965, documento S/6460.

⁴ Ibid., Decimotercero Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1963, documento S/5347.

formes del Secretario General sobre programa especial de capacitación para esos Territorios⁵.

9. Por recomendación de la Cuarta Comisión, la Asamblea General aprobó, el 21 de diciembre de 1965, la resolución 2107 (XX) por la cual, además de reafirmar sus anteriores resoluciones y recomendaciones, formulaba un llamamiento a todos los Estados para que, "en colaboración con la Organización de la Unidad Africana, prestasen a la población de los Territorios bajo administración portuguesa el apoyo moral y material necesario para la restitución de sus derechos inalienables"; condenaba la política del Gobierno de Portugal violatoria de los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento, en gran escala, de inmigrantes extranjeros en los Territorios y la exportación de mano de obra a Sudáfrica; pedía a todos los Estados que se opusiesen a que sus nacionales que participen en intereses financieros extranjeros interviniesen en actividades que constituyesen un obstáculo a que la población lograse sus legítimos derechos de libertad e independencia. La Asamblea General pidió encarecidamente a los Estados Miembros que tomasen las siguientes medidas, individual o colectivamente:

a) Romper las relaciones diplomáticas y consulares con el Gobierno de Portugal o abstenerse de establecerlas;

b) Cerrar sus puertas a todos los barcos de bandera portuguesa o que estuvieran al servicio de Portugal;

c) Prohibir a sus barcos que entrasen a los puertos de Portugal y de sus Territorios coloniales;

d) Negar el aterrizaje y tránsito a todas las aeronaves que pertenecieran o estuvieran al servicio de Portugal o de compañías registradas conforme a las leyes de Portugal;

e) Boicotear todo el comercio con Portugal.

Pidió también al Consejo de Seguridad que considerase la posibilidad de llevar a la práctica contra Portugal las medidas apropiadas previstas en la Carta, a fin de dar cumplimiento a sus resoluciones referentes a los Territorios bajo administración portuguesa.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS

1. Los Territorios en general

Evolución constitucional y política

10. Desde que se derogó el Estatuto de los Indígenas en 1961 se ha introducido una serie de modificaciones legislativas encaminadas a completar el marco institucional para la integración política y económica de los Territorios de Ultramar con Portugal. Con la publicación de un decreto (No. 45.830 de 25 de julio de 1964) por el que se aumenta el número de miembros de la Cámara Corporativa, quedaron terminados los cambios destinados a llevar a efecto la transformación constitucional que prevé "una mayor intervención" de los Territorios "en la dirección de la política nacional".

11. Como se verá más adelante, el Gobierno de Portugal considera que Portugal y los Territorios de

Ultramar constituyen una "nación pluricontinental y multirracial" y que no se puede ya considerar cambio alguno en las relaciones que existen entre ellos. En una entrevista celebrada el 4 de agosto de 1965, el Primer Ministro Salazar explicó la política de su Gobierno en la forma siguiente:

"Sólo podríamos convenir en la idea de la libre determinación para los Territorios de Ultramar, en el sentido en que se la entiende actualmente, si tales Territorios tuvieran que escoger su destino como nación o su forma como Estado. Sin embargo, la situación es que, como consecuencia de la integración que durante siglos ha sido un principio de la política de ultramar de Portugal, tales Territorios en su totalidad forman ya una nación y un Estado soberano. Admitir, cada vez que hay una crisis política, que parte de un Territorio tiene el derecho de la libre determinación en el sentido expuesto más arriba, es crear un factor de inestabilidad y de desunión nacional. Aunque el problema puede ser pertinente cuando se trata de Territorios dependientes o de colonias que desean alcanzar la independencia y definir sus relaciones con el Estado que ejerció derechos de soberanía sobre ellos, no es pertinente en el caso de Portugal.

"En el caso de Portugal lo único que importa es determinar si las leyes confieren a los ciudadanos de los Territorios los mismos derechos políticos, esto es, aquellos mediante los cuales el individuo influye sobre el carácter de los órganos estatales. Si tales derechos son los mismos en todos los Territorios, entonces no tenemos ciudadanos y súbditos, sino sólo ciudadanos, aun cuando éstos sólo participen en ciertas funciones de acuerdo con sus capacidades.

"Este punto es, empero, asunto de ley electoral y no un asunto político. Los promotores de la revolución africana están tratando de eludir el problema al hacer del principio de que un hombre equivale a un voto la base de sus peticiones. Nadie que tenga sentido de responsabilidad aceptará una tesis que sólo se defiende para lograr ciertos resultados, y no porque dicha tesis esté fundada en la verdad o la justicia."

12. En 1965 los acontecimientos políticos más importantes fueron las elecciones presidenciales en julio y las elecciones a la Asamblea General en noviembre. Dichas elecciones se describen con algunos detalles más adelante pues fueron las primeras elecciones "nacionales" celebradas desde que se concedió una más amplia representación a los Territorios de Ultramar en los órganos centrales del Gobierno en virtud de la Ley Orgánica de Ultramar de 1963.

a) Elección del Jefe de Estado

13. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 5) en 1965 se eligió por primera vez el Jefe de Estado de Portugal mediante un colegio electoral, establecido por Decreto No. 43.548 de 21 de marzo de 1961. Dicho colegio electoral, cuando cuenta con la plenitud de sus miembros, está compuesto por los miembros en ejercicio de la Asamblea Nacional y de la Cámara Corporativa, más representantes de la mitad del número de los concejos municipales en cada distrito o en cada Territorio que no está dividido en distritos, y un número determinado de representantes nombrados por el Consejo Legislativo de cada Territorio entre sus propios miembros.

⁵ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 71 del programa, documentos A/5783 y Add.1 y A/6076 y Add.1 y 2.

14. El Colegio Electoral está compuesto por 616 miembros cuando se halla plenamente constituido. De esta cifra total 130 miembros son diputados de la Asamblea Nacional, 205 son miembros de la Cámara Corporativa, 211 son representantes de concejos municipales, y 70 son miembros de los consejos legislativos de los Territorios de Ultramar. Los siete Territorios de Ultramar están representados por 135 miembros. Entre estos miembros figuran 20 diputados a la Asamblea Nacional, 9 miembros de la Cámara Corporativa, 46 miembros que representan a los concejos municipales y 60 miembros de los consejos legislativos territoriales. La composición total de cada uno de los Territorios en el colegio electoral se distribuye así: Angola 51⁶, Mozambique 51⁶, Cabo Verde 13 y Guinea bajo administración portuguesa, Santo Tomé y Príncipe, Timor y Macao figuraban con 5 miembros cada uno.

15. En virtud de la Constitución, los candidatos que se presenten para la elección al cargo de Presidente deben ser aprobados por el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por el Primer Ministro. En 1965 el único candidato fue el Contralmirante Américo Thomaz, Presidente en ejercicio, escogido por la Unión Nacional como "candidato de continuidad en un período de emergencia nacional". En 1965 no se presentó ningún candidato de la oposición, porque, según se dijo había declarado el Sr. Mário de Azevedo Gomes, uno de los jefes del Accão Democrático-Social, su grupo no consideraba que la elección presidencial mediante el colegio electoral constituyese "un acto nacional", pues el nuevo sistema de sufragio indirecto excluía toda representación posible de la oposición.

16. Al reunirse el colegio electoral el 7 de julio se encontraban presentes 585 miembros. El resultado de la votación dio 556 votos por el Almirante Thomaz y 13 votos en contra. Dieciséis miembros del colegio electoral no respondieron a la votación nominal. Al asumir el cargo y en ejercicio de sus poderes, el Presidente Thomaz nombró al Sr. Oliveira Salazar para que continuase en el cargo de Primer Ministro. En su discurso inaugural el Presidente Thomaz tributó homenaje a las fuerzas armadas por su defensa intransigente del territorio nacional en Angola, Mozambique y Guinea bajo administración portuguesa, donde se continuaba la lucha en las fronteras con los países recién independizados. Destacó que "la lucha debe continuar hasta nuestra victoria final, que puede apresurarse con un entendimiento más realista del Occidente".

17. Aunque Angola, Mozambique y Guinea bajo administración portuguesa contaban juntos con más o menos el 20% de los puestos en el colegio electoral, no parece que los africanos tuvieron mucha participación en la elección presidencial.

18. En primer lugar, los diputados representantes de los Territorios en la Asamblea Nacional habían sido elegidos en noviembre de 1961 a base de las listas electorales compiladas antes de la derogación del Estatuto de los Indígenas, y no se halló indicación alguna de que se hubiesen agregado más africanos a dichas listas⁷. En segundo lugar, en cada uno de los consejos legislativos de los tres Territorios, fuera del número limitado de africanos que reunían los requisitos nece-

sarios para votar en las elecciones directas organizadas con arreglo a la nueva Ley Electoral de 6 de diciembre de 1963 (A/5800/Rev.1, cap. V, párrs. 54 a 64), el resto de la población africana está representada por sólo tres miembros de una cifra total de 36 en Angola, 29 en Mozambique y 14 en Guinea bajo administración portuguesa (*ibid.*, párrs. 35 y 36, y apéndice cuadro 1). En tercer lugar, los concejos municipales están establecidos solamente en *concelhos* en aquellos lugares en que hay más de 500 votantes registrados (Decreto 43.730 de 12 de junio de 1961). Estos concejos están compuestos por un presidente que, por regla general, es el administrador, y cuatro concejales que representan intereses económicos públicos o privados, intereses morales (religiosos) o profesionales, o, en su defecto, por "los contribuyentes, personas físicas de nacionalidad portuguesa, empadronados con una contribución directa mínima de 1.000 escudos". En cuarto lugar, los representantes de Angola y Mozambique en la Cámara Corporativa son elegidos en cada Territorio por el Consejo Económico y Social, cuyos miembros representan a órganos administrativos gubernamentales e intereses económicos y profesionales (*ibid.*, párr. 23).

b) Elecciones para la Asamblea Nacional

19. El 28 de septiembre, pocas semanas después que el Presidente Thomaz asumió el cargo por un segundo período de siete años, el Gobierno anunció que el 7 de noviembre se celebrarían las elecciones para la Asamblea Nacional. Había que presentar dentro de una semana (antes del 6 de octubre) a los gobernadores de distrito pertinentes los nombres de los candidatos electorales. Se fijó un período de 30 días (de 6 de octubre a 6 de noviembre) para la campaña electoral.

20. Como los partidos políticos no están reconocidos en el Portugal excepto para la organización gubernamental llamada la Unión Nacional, la única época en que se reconoce públicamente la opinión organizada de la oposición es durante el período de campaña electoral de 30 días. Los grupos opositores existen, sin embargo, y figuran en ellos algunos antiguos funcionarios oficiales. A principios de octubre uno de tales grupos, bajo el nombre de Accão Democrático-Social decidió oponerse a los candidatos de la Unión Nacional en cinco (Lisboa, Oporto, Viseu, Leira y Braga) de los 30 distritos electorales de Portugal. En los Territorios de Ultramar no se presentaron candidatos de oposición.

21. Dicho grupo, al que la prensa llamó de oposición, publicó el 14 de octubre un manifiesto de 5.000 palabras en el que protestaba por la censura impuesta por el Gobierno a las noticias así como la falta de libertad de asociación y de expresión. Además de reafirmar el programa para la democratización del país expuesto en un manifiesto anterior publicado por los opositores del régimen en 1961, la oposición dejó constancia de sus opiniones sobre la política del Gobierno en los Territorios de Ultramar (pese a que según un comunicado de prensa del 12 de septiembre el Ministro del Interior, Alfredo Santos, hijo, había advertido que el Gobierno no toleraría discrepancia sobre su política de Gobierno continuado de Portugal en Africa).

22. El manifiesto de la oposición tomó nota de que si bien la guerra en Angola había terminado oficialmente en 1961, no sólo continuaba allí la lucha sino que se había extendido a Mozambique y Guinea bajo

⁶ La prensa de Mozambique publicó sin embargo 52 nombres de representantes.

⁷ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 54 del programa, documento A/5160 y Add.1 y 2, párr. 264.

administración portuguesa, y que no había ya ninguna esperanza de que la guerra terminase pronto. El manifiesto se oponía a la solución del problema de los Territorios de Ultramar por medios militares, señalando que "el país estaba extenuado con la pérdida de valiosas vidas para alcanzar un objetivo imprevisible y estaba exponiéndose a una calamidad económica...". "Sostenemos", declaraba la oposición, "que lo que se requiere sin tardanza es una solución política basada en el principio de la libre determinación, ejercida mediante medios democráticos. Esta solución es la que nos impone nuestra conciencia de hombres libres que... consideran la descolonización como un fenómeno irrevocable...". El Gobierno debe realizar el proceso de libre determinación en los Territorios de Ultramar de manera que los resultados sean aceptados internacionalmente, a fin de que los Territorios obtengan la simpatía y posible asistencia de las Naciones Unidas, que hasta ahora les han sido negadas debido a las políticas del Gobierno.

23. Al protestar en general contra la censura oficial, el manifiesto citó como ejemplo concreto la medida tomada por el Gobierno con respecto al documento básico sobre los Territorios bajo administración portuguesa preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas para el Comité Especial sobre la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en 1965. La oposición se quejó de que si bien el Gobierno había dado amplia publicidad al comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que caracterizaba el documento de las Naciones Unidas como un documento en que figuraban "citas tendenciosas de textos oficiales" y "errores de hecho", dicho documento no se había distribuido, y en consecuencia el pueblo portugués no podía ni siquiera conocer las realidades de la situación.

24. Cuando se publicó el manifiesto de la oposición en los periódicos de Portugal el 16 de octubre, se lo acompañó con muchos artículos que informaban sobre protestas de Angola, Mozambique y otros Territorios contra el apoyo de la oposición al principio de la libre determinación para los Territorios de Ultramar. El 17 de octubre la prensa portuguesa publicó una declaración del Ministro del Interior en que replicaba a los diversos puntos planteados por el manifiesto de la oposición, y una declaración de la Unidad Nacional que se ocupaba principalmente de la cuestión de los Territorios de Ultramar.

25. La Unión Nacional impugnó las propuestas de la oposición en favor de una solución "política". La Unión señaló que si bien la oposición no era partidaria de una solución militar porque estaba extenuando a la nación, no había negado la posibilidad de tal solución. Cualquiera que fuera el precio de ello, Portugal no abandonaría nunca su defensa legítima de su territorio nacional contra la agresión externa.

26. Según la Unión Nacional, la razón principal por la cual había que preferir una "solución militar" era que la pretendida solución "política" al problema de los Territorios de Ultramar conduciría inevitablemente a su secesión de Portugal. Llevado a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que estaban dominadas por los países de África y de Asia, el proceso de la libre determinación de los Territorios de Ultramar sólo podía conducir a la desintegración de la nación portuguesa, por todo lo cual, a juicio de la Unión

Nacional, la propuesta de la oposición equivalía a una traición.

27. El 20 de octubre la oposición retiró sus candidatos de cuatro de los distritos electorales y ulteriormente también de Braga. Según informes de la prensa, el retiro de los candidatos de este último distrito se debió a la censura y otras restricciones del Gobierno que le negaban la libertad necesaria para la realización de la campaña.

28. En las dos semanas siguientes siguieron publicándose diariamente en la prensa portuguesa protestas procedentes de filiales de la Unión Nacional así como de varios órganos cívicos y profesionales del Gobierno de Portugal y de los Territorios de Ultramar, que apoyaban la norma de integración política del Gobierno y afirmaban la identidad portuguesa (*portuguesismo*) de los Territorios y de sus habitantes.

29. El 5 de noviembre se publicaron otros tres manifiestos. La Liga Monarquista repudiaba la fórmula de la oposición para la libre determinación de los Territorios de Ultramar, y apoyaba la política de descentralización del Gobierno por estar de acuerdo con la unidad administrativa política de la nación. El Movimiento Monarquista Independiente protestaba de que ciertos intereses financieros continuasen las guerras en África, a pesar de que una larga guerra no convenía a los intereses de la nación. Se publicó un tercer manifiesto de más de 100 laicos católicos no identificados con ninguna posición política especial.

30. El manifiesto católico, que fue enviado previamente al Presidente Thomaz, protestaba contra la censura del Gobierno, las medidas adoptadas contra misioneros y sacerdotes de Angola, incluso su detención y destierro⁸, la persecución de aquellos que no estaban de acuerdo con la política del Gobierno, y con "un sistema electoral desprovisto de dignidad o sinceridad", ya que sólo se permitía un solo partido. Protestaba en particular contra la prohibición del Gobierno de discutir públicamente la libre determinación para los Territorios de Ultramar. El grupo católico criticaba también al Gobierno por continuar la guerra que, según sus propias palabras, "aunque apoyada desde afuera, no se debía enteramente a esfuerzos foráneos". El grupo afirmaba también que el Gobierno no había dado al pueblo de los Territorios de Ultramar la oportunidad de expresar en forma libre y ordenada sus opiniones y lo había así empujado a la violencia. Expresaba su apoyo por una solución pacífica para el problema de los Territorios de Ultramar y sugería la celebración de un libre diálogo entre dichos Territorios y Portugal. El grupo católico preguntaba a este respecto al Gobierno por qué no consultaba al pueblo sobre sus opiniones acerca de los Territorios de Ultramar si es que, conforme a sus declaraciones, tenía confianza de que su política de integración era defendida por la gran mayoría del pueblo.

31. En la víspera de las elecciones, el Sr. Salazar dirigió la palabra al pueblo por la radio y replicó al manifiesto de la oposición diciendo que sólo contenía críticas estériles, como por ejemplo, la queja contra el Gobierno por no haber traducido el documento de las

⁸ Al producirse la insurrección de 1961, en Angola fueron detenidos ocho sacerdotes católicos romanos. Todos ellos eran negros o mulatos. Algunos fueron detenidos en Angola aunque no se formularon acusaciones formales. Se encuentran actualmente en Lisboa y se les impide volver al Territorio.

Naciones Unidas, puesto que el documento estaba disponible en las lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Con respecto a las opiniones de la oposición sobre los Territorios de Ultramar, consideraba que las abrumadoras manifestaciones constituían una expresión real del pueblo, un plebiscito, que demostraba que la unidad nacional era un hecho; no había ya utilidad ninguna en discutirla. Hacía un llamamiento al pueblo a que votara como afirmación de su identidad portuguesa (*portuguesismo*) y como una profesión de fe.

32. En las elecciones celebradas el 7 de noviembre los candidatos de la Unión Nacional fueron reelegidos para la totalidad de los 130 puestos en la Asamblea Nacional. Aunque para los distritos electorales de Portugal se publicaron resultados electorales más o menos detallados, se consiguió muy poca información sobre el número efectivo de votantes en los Territorios de Ultramar. Las cifras más detalladas fueron las de Mozambique, en que de una población de 6.600.000 habitantes se inscribieron unos 74.000 (más o menos el 1,1% de la población) en los registros electorales, y unos 64.000 tomaron parte en la votación (véase más abajo). En Santo Tomé, de una población total de más o menos 60.000 habitantes, se inscribieron unos 5.000 (o sea el 8%) en los registros electorales, y votaron unos 3.800. Con respecto a los demás Territorios, las únicas cifras disponibles son los porcentajes del electorado que tomó parte en la votación. Según diversas informaciones parece que en Portugal y en las islas adyacentes con una población total de menos de 10 millones, es probable que votaron entre 1.200.000 y 1.500.000 personas⁹; en los Territorios de Ultramar, con una población total de más de 13 millones de personas, no más del 2% tomó parte en la votación.

⁹ La oposición argumentó en su manifiesto que de una población total de 23 millones de personas de Portugal y sus Territorios de Ultramar, menos de 900.000 personas tuvieron derecho a voto. En su respuesta el Ministro del Interior declaró que esto era falso, ya que sólo en Portugal y las islas adyacentes el electorado ascendía a varios cientos de miles más que la cifra citada por la oposición.

Actividades y gastos militares en los Territorios de Ultramar

33. Al inaugurarse la recién elegida Asamblea Nacional en diciembre de 1965, el Presidente Thomaz declaró que las dos principales tareas que tenía ante sí el Portugal eran la defensa de la integridad del territorio nacional y el desarrollo económico de todo el dominio de Portugal (*espaco português*). Aunque Portugal se encontraba en un trágico dilema, no le cabía otra cosa que continuar por el sendero escogido para subsistir y no le era posible prever por cuánto tiempo se enfrentarían los órganos del Gobierno y el pueblo de Portugal con la tarea de defender los Territorios de Ultramar y sus habitantes. Paralelamente con tales esfuerzos, se aceleraría el desarrollo económico con el fin de aumentar colectivamente la riqueza del reino de Portugal a fin de asegurar su defensa mientras lo hiciese necesario la situación mundial.

34. Estos dos objetivos relacionados entre sí se reflejan en el presupuesto de Portugal para 1966, que prevé un gasto total de 17.410.300.000 escudos¹⁰. De esta cifra total, 11.026.500.000 escudos se destinan al presupuesto ordinario, y 6.383.800.000 escudos para el presupuesto extraordinario, que comprende 4.011 millones de escudos para gastos de defensa nacional de ultramar y 2.203.300.000 escudos para "otras inversiones". Los gastos de defensa representan por lo tanto el 63% del presupuesto extraordinario para 1966.

35. Los gastos de defensa de ultramar han aumentado constantemente desde 1961. El cuadro que figura a continuación señala que en 1965 las asignaciones presupuestarias fueron un 60% más altas que en 1961, y que para el período 1961-1965 las asignaciones totales por este concepto ascendieron a unos 17 mil millones de escudos o sea, aproximadamente, a 600 millones de dólares.

¹⁰ Un escudo equivale a 3,5 centavos de dólar; el dólar de los Estados Unidos equivale a 28,50 escudos.

GASTOS MILITARES DE ULTRAMAR, 1961-1965
(En millones de escudos)

	Asignaciones presupuestarias		Total	Total como porcentaje del PNB a precio del mercado
	Asignación inicial	Complementaria		
1961	950	1.500	2.450	...
1962	1.500	1.796	3.296	4,1
1963	1.750	1.666,2	3.416,2	3,9
1964	1.750	1.851,4	3.601,4	3,8
1965	2.000	2.043	4.043	4,1

36. En 1965 el Sr. Salazar fijó el costo de la defensa de los Territorios de Ultramar en 3.500 millones de escudos al año. Al formular observaciones a este respecto, un artículo aparecido en *Portugal and Overseas Provinces, Economist Intelligence Unit, Quarterly Economic Review*, en abril de 1965, decía: "Este es ciertamente un cálculo que se queda corto y que no toma en cuenta el efecto deflacionario causado a la economía de la metrópoli por la falta de confianza (como en el período 1961/1962), por el aumento de la carga tributaria y por el hecho de que gran parte de los fondos para la guerra, recogidos en el Portugal metropolitano,

se gastan en las provincias y en el exterior. Sin embargo, cuando se lo compara con las ventajas acumuladas para Portugal en el pasado por concepto de sus Provincias de Ultramar, puede justificarse, suponiendo siempre que se pueda lograr una victoria militar y que no se altere el equilibrio de poder en Africa meridional. En realidad, en los tres años del período 1961-1963 la suma acumulada para la zona del escudo procedente de las cuentas comerciales y excedentes de invisibles de las provincias (principalmente ingresos de transporte y operaciones mineras) alcanzaron un promedio de 29.100.000 escudos al año."

37. Aunque en la introducción al presupuesto figura la declaración de que, en la medida de lo posible, existe el propósito de financiar los gastos de defensa con cargo a excedentes presupuestarios, casi el 50% del presupuesto extraordinario de 1966 (en que figuran los gastos de defensa extraordinarios) está financiado por empréstitos internos y externos. En millones de escudos, las partidas se distribuyen en la forma siguiente: 1.901.100.000 dólares (30% del total) procedente de empréstitos internos; 1.058.500.000 dólares (16,5%) procedente de empréstitos externos, 232 millones de bonos de desarrollo interno, 78.500.000 de acuñación de monedas (*amoedação*); y como en 1965, 100 millones procedentes del impuesto especial de defensa y desarrollo de ultramar. No existen datos sobre la fuente de los empréstitos externos previstos en 1966.

38. Como se señaló el año pasado (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 18), en los últimos años ha habido que aumentar tanto los impuestos directos como indirectos para financiar el presupuesto ordinario. Desde 1961 la renta ordinaria ha aumentado en un 50%, de 8.238.400.000 a 12.818.700.000 escudos en 1966. Entre 1960 y 1964, los impuestos directos aumentaron en un 27%, los impuestos indirectos en un 33% y los impuestos industriales especiales (con inclusión de los impuestos al consumo de cerveza y tabaco) aumentaron en un 66%. En 1966 los ingresos procedentes de impuestos directos se calculan en 4.320.400.000 escudos, los procedentes de los impuestos indirectos en 4.093.600.000 escudos y los de industrias sometidas a un régimen especial en 946.400.000 escudos. El cálculo total de ingresos procedentes de estas tres fuentes es de 865.300.000 escudos más que en 1965.

39. En 1965, varios artículos de periódicos informaban que algunos economistas de Lisboa consideraban que la guerra de Africa había resultado ser una "bendición" para Portugal, pues las industrias iban creciendo en proporción con los pedidos militares, que fluctuaban desde las municiones hasta los productos alimenticios y textiles, y las remesas procedentes de las tropas de ultramar habían inyectado nuevo dinero en la economía. Sin embargo, el presupuesto muestra que si bien los gastos ordinarios aumentaron en un 32% entre 1961 y 1966 (los gastos sanitarios y de bienestar aumentaron en un 26%, los gastos de educación nacional en un 40%), los gastos de servicio de la deuda pública aumentaron en 122%. En 1966 el servicio de la deuda pública ascendió a casi la quinta parte del total del presupuesto ordinario, en comparación con sólo la décima parte en 1961. Como se informó anteriormente, la deuda nacional al 30 de septiembre de 1964 representaba ya un 29% del producto nacional bruto y además como los gastos extraordinarios de defensa se financian en gran parte con empréstitos internos, es limitada la cantidad de fondos disponibles para el desarrollo. Parte del *Plano Intercalar de Fomento* es financiado con inversiones extranjeras en los Territorios de Ultramar.

Relaciones internacionales de Portugal que afectan a los Territorios colocados bajo su administración

a) Participación en organizaciones internacionales y regionales

40. Debido a su política de ultramar sigue siendo impugnado por otros Estados Miembros el derecho de Portugal a la admisión y participación en las activida-

des de diversas organizaciones internacionales y regionales.

41. En mayo de 1965, el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó una resolución en la que invita al "Director General a realizar, con la autorización del Gobierno portugués, por intermedio de funcionarios competentes de la Secretaría o de personalidades eminentes adecuadas, un estudio *in situ* sobre el estado actual de la educación en los Territorios africanos bajo administración portuguesa, desde el punto de vista de los fines y objetivos generales de la UNESCO, definidos en su Constitución y en las resoluciones pertinentes de la Conferencia General". La resolución pidió además al Director General "que mantenga en suspenso, en espera de los resultados de este estudio y de su examen por el Consejo, las invitaciones destinadas a Portugal en virtud de decisiones de la Conferencia General o del Consejo Ejecutivo".

42. Portugal consintió en los estudios educacionales a condición de que se restaurasen sus derechos en la UNESCO y se realizasen estudios similares en otros países miembros. Durante 1965, sin embargo, Portugal fue eliminado de la 28a. Conferencia Nacional sobre Educación Pública celebrada en Ginebra el 1º de julio de ese año y del Congreso Mundial de Ministros de Educación sobre la erradicación del analfabetismo celebrado en septiembre en Teherán.

43. Portugal ha pedido ulteriormente que la decisión del Consejo Ejecutivo sea remitida a la Corte Internacional de Justicia para que emita una opinión consultiva. En octubre de 1965 el Consejo Ejecutivo de la UNESCO decidió aplazar el estudio de la petición de Portugal hasta su reunión de 1966; Portugal continúa mientras tanto eliminado de las conferencias de la UNESCO.

44. La cuestión de la admisión de Portugal se planteó también en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Azúcar reunidas ambas en septiembre de 1965.

45. Portugal participa en varias actividades internacionales y regionales que interesan a los Territorios africanos que Portugal pretende son sus provincias de Ultramar. Así, por ejemplo, Portugal es parte del acuerdo internacional a largo plazo sobre el café, como país productor, si bien el productor es Angola. De un modo similar fue también miembro de la Organización Interafricana del Café desde su creación hasta noviembre de 1965, fecha en que se lo expulsó por no ser país africano. Se dejó en claro, sin embargo, que Angola sería acogida con agrado como miembro tan pronto como pudiese cumplir con las obligaciones de la Organización.

46. Durante el 15º período de sesiones del Comité Regional de la OMS para Africa, celebrado en Lusaka, Zambia, en septiembre de 1965, se impugnó el derecho a participar de Portugal debido a su política colonial, y se hizo referencia a los problemas sanitarios creados por los refugiados procedentes de las colonias portuguesas de Africa. El Comité Regional aprobó ulteriormente una resolución que promete a los Estados Miembros de la región hacer todo lo posible por proteger y promover los derechos sanitarios de las poblaciones de las colonias portuguesas de Africa empeñadas en su lucha por la liberación nacional. Invita también a los

Estados africanos representados en los órganos de la OMS a examinar todos los medios que puedan inducir al Gobierno de Portugal a renunciar de una vez por todas a su política colonial de opresión. La resolución fue transmitida al Director General con la petición de que la señale a la atención de la decimonovena Asamblea Mundial de la Salud que se reunirá en mayo de 1966.

b) *Relaciones comerciales con Rhodesia del Sur*

47. El 24 de febrero de 1965 se firmó un acuerdo comercial entre Portugal y Rhodesia del Sur. Este acuerdo reemplazó un antiguo acuerdo sobre comercio entre Mozambique y la ahora inexistente Federación Centroafricana. El acuerdo se extiende tanto a Angola como a Mozambique y estipula que las dos partes aplicarán la cláusula de la nación más favorecida con respecto a las mercaderías importadas de la otra parte excepto en cuanto se refiera a: i) disposiciones especiales relativas a las mercaderías producidas y comercializadas dentro de la zona del escudo; ii) disposiciones especiales relativas al comercio entre Portugal y España o Brasil; iii) concesiones especiales aplicadas a Rhodesia del Sur en virtud del GATT. El acuerdo exceptúa también de derechos de importación una lista de mercaderías producidas en uno u otro de los tres Territorios.

48. Se podrá observar que si bien existe un importante comercio de tránsito de Rhodesia del Sur a través de Mozambique, no es aquella un asociado comercial importante de Mozambique ni de Angola, que juntos representan menos del 2% del valor de su comercio total.

49. Además de lo que precede existen sin embargo acuerdos relativos al suministro de energía hidroeléctrica y petróleo crudo de Mozambique a Umtali. Estos aspectos se analizan en la sección sobre Mozambique. Se informa que no se ha enviado petróleo por el oleoducto de Beira a Umtali desde el 31 de diciembre de 1965.

c) *Otras actividades*

50. En un esfuerzo por promover más estrechas relaciones comerciales entre Angola y Mozambique con Sudáfrica, en noviembre de 1965 se creó en Johannesburgo el Bank of Lisbon and South Africa, Ltd., con un capital inicial de 2.000 millones de rands. Las empresas portuguesas son el Banco de Angola, el Banco Comercial de Angola y el Banco Nacional Ultramarino, que percibirán cada uno un 25% de interés. La empresa de Sudáfrica es la General Mining and Finance Corporation (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párr. 199). Esta institución tiene un plazo de un año para aumentar su cartera al 25%. Los informes de la prensa atribuyen importancia a la participación de dicha institución porque Sudáfrica está interesada en la exploración del petróleo en Angola.

51. Se informa que durante el año pasado Portugal robusteció sus relaciones con Brasil, Francia, República Federal de Alemania y España. Está actualmente negociando un nuevo tratado de amistad con Brasil, que se extenderá a los Territorios africanos bajo administración portuguesa. Portugal está también interesado en la creación de una comunidad lusitano-brasileña. En 1965 se informó por la prensa que Fran-

cia, que en abril de 1964 concedió un préstamo a largo plazo a Portugal para la construcción de barcos de guerra y submarinos (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 82), está proporcionando a Portugal helicópteros marca Alouette que según se dice se utilizarán en África. Se han firmado varios acuerdos entre Portugal y la República Federal de Alemania que tienen principalmente por objeto el comercio, relaciones culturales y seguridad social. Según los informes de la prensa existe también un acuerdo entre los dos países por el cual la República Federal de Alemania construirá una base para aviones de propulsión en Beja y proporcionará a Portugal aviones de propulsión de combate para sus operaciones en África.

Integración económica y desarrollo

a) *Integración económica*

52. Hasta 1965 la mayoría de las disposiciones que se habían aplicado para llevar a cabo la integración económica de los Territorios de Ultramar con Portugal fueron principalmente de carácter financiero y comercial. En conformidad con el plan, se eliminarán progresivamente los derechos de importación y exportación sobre las mercaderías producidas y comercializadas dentro de la "zona del escudo", y se deberán suprimir totalmente para 1972. La disminución de los derechos aduaneros y la suspensión de las cuotas de importación han dado ya como resultado un considerable aumento en el comercio entre Portugal y los Territorios de Ultramar. La supresión de tarifas aduaneras en la zona del escudo asegura a Portugal amplios y crecientes mercados para sus productos manufacturados en los Territorios de Ultramar, por lo cual estiman algunos observadores que la pérdida de los Territorios tendría un efecto desastroso en la economía de Portugal.

53. Por el contrario, ha hecho menos progreso la liberación de las actuales operaciones de comercio invisible y el movimiento de capital que depende de las condiciones económicas generales de los Territorios. Han continuado en vigor los controles de cambios y la moneda local de los Territorios no goza todavía de libre convertibilidad en escudos portugueses.

54. Al completarse el marco institucional para la integración política, se introdujeron en 1965 diversas medidas nuevas encaminadas a apresurar la integración y desarrollo económicos. Entre estas nuevas medidas figuran: i) reglamentos sobre inversiones extranjeras en los Territorios de Ultramar; ii) medidas para la creación de instituciones crediticias portuguesas y extranjeras; iii) liberación de las condiciones necesarias para la creación de nuevas industrias; y iv) creación de un servicio nacional de empleo e intensificación de las medidas encaminadas a fomentar la colonización de ultramar. Todas estas medidas se describen por separado más adelante (secciones a) a f)). Una vez que estas medidas se apliquen totalmente, tendrán por efecto la realización de cambios fundamentales en el doble papel tradicional de los Territorios como abastecedores de materias primas y como mercados cautivos para los productos manufacturados de Portugal¹¹, permitiendo que los Territorios puedan más fácilmente bastarse a sí mismos. Como lo señala el *Plano Intercalar de Fomento*

¹¹ Se puede citar como ejemplo típico de esta relación tradicional el sistema de cultivo de algodón en Angola y Mozambique en el pasado; los cambios que se deberán introducir a dicho sistema se describen en el apéndice I.

para 1965-1967, en el futuro inmediato el principal objetivo consistirá en estimular los proyectos de fomento de ingresos.

b) *Financiación del desarrollo económico en los Territorios de Ultramar*

55. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 36), para el conjunto de los Territorios de Ultramar los fondos previstos en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* procederán, casi por partes iguales, del Gobierno (inclusive fondos territoriales), los inversionistas privados y préstamos del exterior. En el pasado la asistencia financiera procedente del sector público de Portugal a los Territorios de Ultramar consistió principalmente en préstamos del Tesoro y préstamos del Banco de Fomento Nacional¹² y la Caixa Geral de Depósitos, Cré-

¹² El Banco de Fomento Nacional asegura la financiación y garantías tanto para el sector público como privado; en

dito e Previdência. El reciente aumento en dicha asistencia se refleja en el cuadro que va a continuación, que expone la forma en que se ha distribuido la asistencia financiera procedente del sector público en los años 1962 a 1964. Se podrá observar que los préstamos del Tesoro aumentaron de 898 millones de escudos en 1962 a 1.243 millones de escudos en 1964, y que los préstamos del Banco de Fomento Nacional y de la Caixa Geral aumentaron de 234 a 502 millones de escudos. Las asignaciones aumentaron de 89 a 214 millones de escudos y otras formas de asistencia financiera de 500 a 841 millones de escudos.

1964 el 76% aproximadamente de la financiación aprobada se destinó al sector privado. Del total de créditos otorgados en 1964 a los Territorios de Ultramar, 649 millones de escudos se destinaron a financiación (452 millones para Angola y 70 millones para Mozambique) y 381 millones de escudos representaban garantías. En 1965 se autorizó al Banco a emitir bonos para el desarrollo hasta una suma de 250 millones de escudos (Decreto 46.663 de 23 de noviembre de 1965).

ASISTENCIA FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO DE PORTUGAL A LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR EN EL PERÍODO 1962-1964

	1962		1963		1964	
	Millones de escudos	Porcentaje	Millones de escudos	Porcentaje	Millones de escudos	Porcentaje
Préstamos totales	1.132	65,8	1.220	63,7	1.752	62,4
Con inclusión de Préstamos del Tesoro .	898	52,2	1.032	53,9	1.243	44,3
Banco de Fomento Nacional y Caixa Geral ..	234	13,6	188	9,8	509	18,1
Asignaciones	89	5,1	253	13,2	214	7,6
Asignaciones varias	500	29,1	441	23,1	841	30,0
TOTAL	1.721	100,0	1.915	100,0	2.807	100,0

56. En 1965 el Gobierno de Portugal tomó dos medidas encaminadas a movilizar fondos locales en los Territorios de Ultramar a fin de financiar proyectos previstos en el *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*. Una de las medidas (Decreto 46.380) autorizaba a los gobiernos territoriales a contratar empréstitos de los bancos locales. Esto deberá hacerse mediante emisión, en moneda local del Territorio, de pagarés especiales (*promissórias de fomento ultramarino*), de uno a diez millones de escudos cada emisión, a un interés del 2% y amortizable en cinco años. El decreto estipula las cantidades y condiciones bajo las cuales el banco local de emisión y otros bancos comerciales deben suscribir dichos pagarés. La segunda medida (Decretos 46.378 y 46.379 de 11 de junio) tiene por fin movilizar ahorros locales. En virtud de estos decretos se autoriza a los Gobiernos de Angola y Mozambique a emitir bonos especiales del Tesoro del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* (*obrigações do tesouro*)¹³ al interés del 5%, hasta un máximo de 1.000 millones de escudos en el primer Territorio y 500 millones de escudos en el segundo. Dichos bonos deberán emitirse en moneda local del Territorio y amortizarse en cuotas de 6.700.000 escudos anuales durante 14 años, comenzando el sexto año después de la emisión. Los gobier-

nos locales podrán contratar la colocación (*colocação*) de tales bonos mediante instituciones crediticias locales, u ofrecerlos para suscripción directa del público. En el Territorio interesado, el Banco de emisión deberá garantizar los préstamos cuando estén asegurados con dichos bonos. Dentro de la zona del escudo, los bonos podrán utilizarse para ajustar tanto las cuentas de comercio visible como invisible, y cuando se utilicen para este propósito, el pago de interés sobre los bonos y su amortización fuera del Territorio de emisión disfrutará de prioridad sobre los demás traspasos a la misma zona. En el curso del año, ambos Territorios emitieron la primera serie de los nuevos bonos del Tesoro; en Angola la emisión fue de 200 millones de escudos y en Mozambique de 100 millones de escudos.

57. Más tarde, en diciembre de 1965, se autorizó al Ministro de Hacienda a que concediera automáticamente cada año a los Territorios de Ultramar (con excepción de Macao), préstamos hasta por una cifra máxima fijada anualmente por el Consejo de Ministros de Asuntos Económicos para el cumplimiento del *Plano Intercalar de Fomento*. En lo relativo a Angola y Mozambique (Decreto 46.750 de 16 de diciembre) los préstamos deberán ser por 20 años al interés del 4%; con respecto a los Territorios más pequeños (Decreto 46.683 de 3 de diciembre) el período es de 24 años. Para Guinea bajo administración portuguesa, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe dichos préstamos serán

¹³ En Angola, por ejemplo, estos bonos llevan por título: "Obrigações do tesouro de Angola, 5 por cento, 1965, Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967".

la única fuente de financiación del *Plano Intercalar de Fomento*. Cabo Verde está exento del pago de interés mientras se mantenga sin alteraciones su situación financiera. En enero de 1966 se informó que los préstamos totales del Gobierno central a los Territorios de Ultramar para la financiación del *Plano Intercalar de Fomento* ascendieron, con respecto a 1963, a 1.021 millones de escudos, distribuidos en la forma siguiente: 101 millones para Cabo Verde, 35 millones para Guinea bajo administración portuguesa, 36 millones para Santo Tomé y Príncipe, 370 millones para Angola, 423 millones para Mozambique y 56 millones para Timor.

c) *Reglamento sobre inversiones extranjeras en Portugal y en los Territorios de Ultramar*

58. En abril de 1965 (Decreto No. 46.312 de 28 de abril) se estableció un nuevo reglamento que redujo las restricciones impuestas a las inversiones extranjeras en los Territorios de Ultramar. Aunque anteriormente el Gobierno había exigido por lo general que Portugal participase parcialmente en la aportación de capital y en la administración de las empresas establecidas con capital extranjero, no existirá tal exigencia en lo por venir. En diversos sectores económicos ahora pueden establecerse empresas que pertenezcan en su totalidad o en gran parte a extranjeros residentes en el territorio de Portugal o a personas domiciliadas en ultramar, con los mismos derechos a disfrutar de las exenciones tributarias y arancelarias que las empresas nacionales. Sin embargo, las empresas extranjeras quedarán excluidas por lo general de los servicios públicos, actividades relativas al dominio público y actividades de importancia especial para la defensa nacional. Aunque los recursos minerales pertenecen al dominio público, en los Territorios de Ultramar la minería no seguirá perteneciendo a la categoría reservada. Las compañías extranjeras no podrán tampoco adquirir derechos reales sobre la tierra en los Territorios a menos que tengan autorización del Ministro de Ultramar. Las compañías extranjeras también podrán hacer libremente remesas de todo capital importado legítimamente, así como de las ganancias que resulten de dicho capital y de otras actividades. Por el contrario, se podrá autorizar a las empresas nacionales a que contraigan, con la garantía de instituciones crediticias nacionales, empréstitos externos que no excedan de 2.500 millones de escudos o la tercera parte de su capital o su fondo de reserva.

59. En el nuevo reglamento para la coordinación del desarrollo industrial en Portugal y en los Territorios de Ultramar, que se describen en una sección ulterior, figuran las siguientes actividades en que siempre se autorizará la libre participación de capital extranjero (ya sea mediante inversión directa, mediante empréstitos o la compra de acciones): i) mejoras agrícolas, preparación de la tierra, con inclusión de proyectos de riego, crianza de ganado y elaboración de productos agrícolas; ii) mejoramiento y extensión de instalaciones industriales y reorganización de industrias de acuerdo con la nueva ley; iii) fomento de las industrias extractivas, con inclusión del petróleo y demás fuentes de energía; iv) pesca; v) mejoramiento de los medios de transporte y comunicaciones, y vi) fomento del comercio turístico (*Dispatch*, 31 de septiembre de 1965, *Diário do Governo*, Serie I, No. 214).

60. En el mes de mayo un grupo de hombres de negocios y funcionarios del Gobierno de Portugal visi-

taron diversos países de la Comunidad Económica Europea para interesarlos en oportunidades de inversión en Portugal y Territorios de ultramar. Además de diversas empresas industriales y comerciales, estaban también representados en la misión el Banco Burnay, el Bank of Lisbon and the Azores, el Banco Totta-Aliança, el Banco Português do Atlântico y el Banco de Angola. Entre los sectores sugeridos para inversiones extranjeras en los Territorios de ultramar figuraron la minería (especialmente diamantes, petróleo y hierro; véase más adelante, y A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I) y la agricultura (especialmente café, algodón, sisal, té y fibras). (Estas actividades se analizan por separado en un estudio que se está preparando sobre la función de la agricultura en Angola y Mozambique.)

61. A fines de 1965 se habían anunciado algunas nuevas inversiones de capital extranjero. Entre éstas figuraban nuevas inversiones de la firma Petrangol en Angola y de la firma Mabor en una fábrica de neumáticos (véanse párrs. 117 y 124 *infra*). En Mozambique se anunciaron nuevas inversiones para la producción de azúcar y anacardo (véanse párrs. 163 y 164 *infra*).

d) *Servicios bancarios y crediticios*

62. En 1965 se promulgaron nuevas leyes (Decretos Nos. 46.243 y 46.492) destinadas a dotar a los Territorios de más servicios comerciales bancarios y crediticios, y a movilizar al mismo tiempo los ahorros locales. Se ha reducido el monto mínimo de capital y de reservas exigidos por la ley para los bancos o sucursales de bancos establecidos en el Territorio, y según la nueva ley no se permitirá a instituciones de propiedad portuguesa, que no sean bancos comerciales y de inversión, que establezcan sucursales en los Territorios de Ultramar. Las instituciones crediticias de propiedad extranjera pueden operar en los Territorios a condición de que el capital de la sucursal principal del Territorio no sea inferior a la mitad del monto mínimo de capital exigido por la ley.

63. En agosto de 1965 se estableció un banco crediticio comercial e industrial de ultramar en asociación con el Banco Borges e Irmão. El banco tendrá su sede en Angola y una sucursal en Mozambique. Entre los demás asociados del banco crediticio figuran Manufactura Nacional de Borracha, Borges e Irmão Comercial, Lda., Star Imobiliária e Industrial Têxtil do Ave. El capital registrado es de 150 millones de escudos, cifra que puede elevarse a 200 millones de escudos. A fines de 1965 se habían pagado y traspasado a los dos Territorios 75 millones de escudos. Se han ofrecido en venta a los residentes de los Territorios 30.000 acciones de 1.000 escudos cada una. La función especial del banco, que es una institución privada, consistirá en conceder préstamos a plazo medio y a largo plazo para la industria y construcción y servicios crediticios a corto plazo, tales como garantías por no más de seis meses. El banco emprenderá también estudios económicos y financieros de carácter regional y técnico. Hasta el momento de su creación éste era el tercer banco portugués establecido en Angola; los otros dos son el Banco de Angola que es el banco oficial de emisión del Territorio y el Banco Comercial de Angola, creado hace más de un año en asociación con el Banco Português do Atlântico. El único otro banco portugués que queda en Mozambique y en los demás Territorios bajo

administración portuguesa es el Banco Nacional de Ultramar (en portugués, Banco Nacional Ultramarino).

64. En enero de 1966 se informó que el Banco Pinto e Sotto Mayor establecería sucursales en Mozambique. Se atribuye importancia a esta iniciativa pues se la considera como un traspaso de considerables sumas de capital para utilizarlas en el desarrollo de dicho Territorio.

e) *Coordinación del desarrollo industrial en Portugal y en los Territorios de Ultramar*

65. Nuevas leyes promulgadas en noviembre de 1965 (Decreto No. 46.666) fijaron las condiciones para el establecimiento de industrias en los Territorios de Ultramar, así como para la coordinación del desarrollo industrial en el dominio de Portugal.

66. Las industrias se dividen en dos categorías: aquellas que son de interés "nacional" y que afectan la economía de todo el dominio de Portugal, y aquellas que pueden ser controladas por los gobiernos territoriales. Entre las industrias sujetas a reglamentación nacional (*condicionamento*) figuran las siguientes: industrias de productos alimenticios (en que quedan incluidas las fábricas de azúcar pero no las de licores y bebidas); industrias de productos químicos, metales, ingeniería liviana y repuestos metálicos, armamentos, maquinaria, construcción y diversas industrias de transformación. El Gobierno de cada Territorio podrá autorizar libremente el establecimiento de industrias no incluidas en la clasificación nacional, y fijar los planes para su desarrollo. Se deberá evitar la competencia entre las industrias, y deberán éstas sujetarse a los reglamentos sanitarios y del trabajo.

67. Se deberán uniformar gradualmente las condiciones necesarias para el establecimiento de industrias en Portugal y en los Territorios de Ultramar. Con respecto a los Territorios, esto significará que tendrán derecho a establecer industrias diversas (de las que no figuran en la lista "nacional") que utilicen materias primas importadas, y que, hasta ahora, en virtud del Decreto No. 26.509 de 11 de abril de 1936, sólo se aprobaban después de un prolongado proceso de examen y estudio de varias autoridades territoriales y órganos competentes de Lisboa. Otra ventaja de que disfrutarán los Territorios será que ahora podrán autorizar la creación de nuevas industrias, aun cuando los productos no tengan un precio más bajo que los productos similares importados de otras partes del dominio de Portugal. De un modo especial, los Territorios no seguirán sujetos a limitaciones en lo relativo al establecimiento de fábricas de hilados de algodón.

68. La nueva legislación establece al mismo tiempo un control más amplio del Gobierno sobre diversas actividades industriales. Se exigen actualmente licencias para los nuevos edificios o las ampliaciones de fábricas, y autorización del Gobierno para realizar cambios (como, por ejemplo, de equipo) que afecten la producción, o para mudar de instalaciones o domicilio dentro del dominio de Portugal. (En Cabo Verde se necesitará también la aprobación del Gobierno para mudarse de una isla a otra.) A juzgar por los informes de la prensa, el nuevo reglamento autoriza también al Gobierno de Portugal a limitar el establecimiento de compañías extranjeras en Portugal, cuando se crea esto necesario como medida de protección para las industrias nacionales.

f) *Colonización de los Territorios de Ultramar*

69. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II), la colonización europea de los Territorios de Ultramar, principalmente de Angola y Mozambique, ha constituido siempre una piedra angular de la política colonial de Portugal. A raíz del levantamiento en Angola en 1961, se comenzó a destacar que era necesaria "la creación de sociedades multirraciales y la implantación en ultramar de nuevas civilizaciones luso-tropicales" pues constituían el "único baluarte de la presencia nacional en esas tierras y un factor de paz..." (*ibid.*, párr. 158).

70. Tanto en Angola como Mozambique se crearon nuevas juntas provinciales de colonización destinadas a coordinar planes y a acelerar principalmente la colonización de familias portuguesas en los Territorios. Si bien en Angola la Junta de colonización logró establecer una cadena de pequeños núcleos coloniales, la tasa media de colonización de ultramar fue sólo de unas 10.000 personas al año.

71. Cuando se elaboró el año pasado el *Plano Intercalar de Fomento* (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 36), se hizo evidente que con el previsto aumento natural anual de la población activa de 43.000 personas, con el desplazamiento gradual de la mano de obra hacia la industria y la mecanización simultánea de la agricultura, uno de los principales problemas consistiría en encontrar empleo para el excedente de mano de obra de Portugal. Durante el año 1965 se revisó en la Asamblea Nacional y en el Consejo Ultramarino el problema total de la colonización de ultramar y se examinaron cuidadosamente los aspectos político, económico, social y administrativo.

72. En su reunión de octubre el Consejo Ultramarino, que es el más alto órgano encargado de la formulación de política para los Territorios de Ultramar (véase A/5800/Rev.1, cap. V, párrs. 25 a 28), destacó de un modo especial la importancia política que tiene la colonización de los Territorios de Ultramar, tanto desde el punto de vista de la situación interna como de las relaciones externas de Portugal: el asentamiento de colonos procedentes de Portugal no sólo proporcionará mano de obra a los Territorios y estimulará el desarrollo económico, sino que desempeñará también un papel importante en la defensa nacional y en el establecimiento de la civilización portuguesa en dichos Territorios.

73. Entre otros aspectos, el Consejo Ultramarino examinó la cuestión del más conveniente "nivel nacional" de colonización ultramarina, la organización de los servicios de colonización y el tipo de colonias, cuestiones relativas al bienestar económico y social de la población local que se plantean como consecuencia de tales colonizaciones y funciones de las actuales Juntas de colonización.

74. El 11 de diciembre de 1965 se creó un servicio de empleo nacional (Decreto No. 46.731), como primera medida encaminada a contener la emigración de mano de obra de Portugal a otros países europeos. Este organismo establecerá oficinas de empleos públicos, preparará listas de personal técnico y profesional, realizará estudios de las necesidades del mercado de mano de obra y facilitará los traslados dentro de las profesiones. Trabajarán también en colaboración con el Ministerio de Ultramar en la tarea de determinar y vigilar la emigración a países extranjeros.

75. Ulteriormente, en una conferencia de prensa celebrada el 22 de diciembre, el Subsecretario de Estado para los Territorios de Ultramar explicó con algún detalle la posición del Gobierno en esta cuestión, basada en disposiciones de la Constitución (Artículo 133) y en la Ley Orgánica de Ultramar de 1963 (Artículo 69). En los últimos años, de cada cuatro personas que emigraban de Portugal sólo una se iba como colono a los Territorios de Ultramar. Fue necesario por lo tanto mejorar las condiciones en los Territorios con el fin de atraer a aquellos que estaban emigrando a otras partes. El Gobierno estimó que el aumento de la migración ayudaría a acelerar el progreso social y cultural de aquellos habitantes indígenas que habían “evolucionado menos” (*nativos menos evolucionados*) de los Territorios de Ultramar, porque los pondría en más estrecho contacto con los pueblos “más civilizados” (*mais civilizados*).

76. La intensificación de la colonización no se limitaría a aumentar el número de portugueses en los Territorios de África, sino que se procuraría “asentar definitivamente” a los africanos en colonias agrícolas con el doble fin de reemplazar los cultivos alternados con métodos más modernos, abrir nuevas tierras al cultivo y aumentar considerablemente la producción, especialmente de algunos productos que se importan actualmente de países extranjeros. (En el estudio sobre el papel de la agricultura en Angola y Mozambique que se prepara actualmente, figura una información más detallada de los últimos progresos hechos en las colonias agrícolas africanas.)

77. Se informó recientemente en la prensa que a principios de este año la Asamblea Nacional “presionó nuevamente a las autoridades para que aumentasen la afluencia de colonos a Angola y Mozambique como contrapartida de los esfuerzos militares que se hacen para mantener el dominio sobre los Territorios africanos”. Uno de los diputados de Mozambique (el señor Moreira Longo) destacó la necesidad “de aumentar la población civilizada” en Mozambique, especialmente en el interior. Propuso también que el Gobierno estimulase el asentamiento de colonos soldados en los Territorios, plan que se había aplicado en Angola por algún tiempo (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 181 a 183). Otro diputado de Mozambique, el Dr. Henriques Nazaré, adoptó una opinión distinta. Señalando el hecho de que los africanos de las zonas urbanas viven en gran parte en la periferia de las comunidades urbanas y habitan casas cuyas condiciones quedan por debajo de lo normal, declaró que a su juicio se debía asignar la primera prioridad al mejoramiento de la vivienda africana en las zonas urbanas y a la eliminación de condiciones que equivalen a una segregación habitacional (*isolacionismo habitacional*) de las razas. Declaró que estaba persuadido de que el resentimiento creado por estos problemas era una de las causas de la guerra, y que no se había reconocido suficientemente lo importante que era resolver dicho problema. Declaró que se oponía a las “fórmulas hechas” de solución entre las cuales incluía las actividades encaminadas a asentar a agricultores europeos en Angola y Mozambique.

78. La experiencia ha demostrado que una de las principales dificultades que encuentra Portugal para aumentar la colonización europea en los Territorios africanos ha sido la magnitud de los gastos que dicha tarea significa. Se dijo no hace mucho que el Vicepresidente del Consejo Ultramarino, José Bacelar Bebiano,

había calculado que cuesta al Gobierno unos 300.000 escudos (10.500 dólares de los EE.UU.) el asentamiento en África de una sola familia, con los complementos necesarios de tierra, vivienda y servicios generales (véase también A/6000/Rev.1, anexo II, párr. 121).

79. En 1965 se anunció por la prensa que las autoridades de Mozambique habían ofrecido fincas de 5.000 hectáreas cada una en el distrito de Tete a agricultores procedentes de zonas afectadas por la sequía en Sudáfrica. Se exigía a los colonos el pago de un *foro* de medio escudo por hectárea durante 20 años, así como hacerse cargo de todos los gastos de explotación. En noviembre de 1965 se informó que habían firmado contratos 80 agricultores sudafricanos, procedentes en su mayor parte del Transvaal Occidental.

g) Reorganización de servicios técnicos en los Territorios

80. Debido a la importancia que se les atribuye a la agricultura y la minería en el futuro desarrollo económico de los Territorios, en 1965 se reorganizaron y robustecieron los servicios agrícolas y forestales así como los servicios geológicos y mineros de los Territorios de Ultramar. Como se señala más adelante, tanto en Angola como en Mozambique se están ampliando los servicios de capacitación para personal agrícola. Los dos Territorios más extensos contarán cada uno con un departamento geológico y minero que se distribuirá en cinco secciones, a saber, licencias, supervisión (*fiscalização*) e investigación geológica, explotación minera, geología aplicada, servicios generales y administrativos. En los Territorios más pequeños habrá oficinas de geología y de minas.

Educación

81. A raíz de la extensión de la enseñanza primaria obligatoria a los Territorios de Ultramar, en septiembre de 1964 (Decreto No. 45.908 de 10 de septiembre) los cursos especiales de adaptación para niños africanos que existían hasta entonces se integraron formalmente en el sistema escolar primario de ultramar, que es ahora el mismo para todos los niños; los niños que no hablan portugués tienen además un curso preprimario. La reforma de 1964 obligó a todas las escuelas rurales (conocidas con el nombre de *postos escolares*) a que creasen no sólo la clase preprimaria, sino también las tres primeras clases elementales. Con esto se hizo necesario elevar de categoría muchas de las antiguas clases de adaptación para africanos que el Gobierno solía confiar principalmente a las misiones católicas.

82. En 1965 se asignaron sumas considerables en ambos Territorios para la capacitación de maestros (monitores) y la ampliación de edificios escolares que se necesitan con urgencia para cumplir con la enseñanza primaria obligatoria. Mientras no se cuente con los servicios apropiados impuestos por la reforma de 1964, podrá excusarse la inasistencia de niños en edad escolar si viven a más de 5 kilómetros de distancia de una escuela y no tienen medios de transporte gratis. En julio se revisó y robusteció (Decreto No. 46.447 de 20 de julio) el sistema de inspección escolar para los Territorios de ultramar con el fin de mejorar la supervisión y coordinación de todas las actividades educativas.

83. Con el fin de aumentar la producción se está dando más importancia a la educación en general y a la

enseñanza agrícola en particular. En virtud de un Decreto (No. 46.464) de 31 de julio de 1965, se ha procedido a la reorganización de la enseñanza agrícola en los Territorios de ultramar. Se proporcionarán cursos de tres grados: elemental, secundario y profesional (*médio*). La enseñanza agrícola secundaria se proporcionará en *escolas práticas* y en las escuelas industriales. La enseñanza profesional para funcionarios agrícolas (*regentes*) se dará en instituciones separadas y abarcará una capacitación más avanzada en materia de agromía. La enseñanza agrícola correspondiente a los grados secundario y profesional estará colocada bajo la supervisión de los servicios educacionales en lo relativo a los aspectos administrativo y pedagógico, y a los departamentos especiales correspondientes incumbirá la responsabilidad de los aspectos técnicos, así como el suministro de materiales y de personal especializado. Se ofrecerán también cursos especiales a adultos que trabajan en la agricultura.

84. Durante el año no se hicieron cambios en la organización de las escuelas secundarias académicas (*liceus*), que han tenido siempre la misma estructura fundamental que los establecimientos similares de Portugal. En las secciones pertinentes que figuran más adelante se dan más detalles sobre servicios educacionales así como sobre los *Estudos Gerais Universitários* y sobre la matrícula.

85. Como se informó anteriormente (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 104) desde 1963 se ha proporcionado un mayor número de becas a estudiantes de los Territorios de ultramar. En 1964 (Decreto No. 45.769) se implantó un sistema de becas reembolsables que consistían en préstamos otorgados a base de mérito y pagaderos en cuotas después de terminado el curso. En 1964 se otorgaron a estudiantes de los seis Territorios (con exclusión de Macao) 302 becas corrientes y 33 "becas-préstamos". El número de becas y de becas-préstamos, respectivamente, se distribuyeron a cada Territorio en la forma siguiente: Cabo Verde, 27 y 8; Guinea bajo administración portuguesa, 48 y 4; Santo Tomé, 15 y 4; Angola, 116 y 14; Mozambique, 37 y 2; Timor, 26 y 1.

86. En mayo de 1965 (Orden No. 21.310) los premios nacionales de enseñanza secundaria se extendieron a estudiantes de Guinea bajo administración portuguesa, Santo Tomé y Príncipe y Timor. En marzo de 1966 se informó que, como consecuencia del aumento registrado en los últimos años en el número de estudiantes de los Territorios de Ultramar, se revisaría el sistema de becas para los estudiantes secundarios. El valor total de las becas es actualmente de 14.700.000 escudos, de los cuales 5 millones son para estudiantes de Angola, 4.800.000 para Mozambique, 507.000 para Guinea bajo administración portuguesa, 450.000 para Cabo Verde, 105.000 para Santo Tomé y Príncipe y 48.000 para Timor.

2. Angola

Evolución constitucional y política

a) Elección del Jefe de Estado

87. La elección del Jefe de Estado no fue objeto de muchos comentarios en la prensa de Angola. De un total de 616 representantes en el Colegio Electoral, Angola contaba con 51 distribuidos en la forma siguiente: 7 diputados a la Asamblea Nacional, 2 miem-

bros de la Cámara Corporativa, 24 miembros del Consejo Legislativo, escogidos entre ellos mismos y 18 representantes de los concejos municipales.

88. Es importante señalar que Angola, con una población total de 4.800.000 habitantes según el censo de 1960, y con una población calculada en 5.500.000 habitantes en 1965 tenía solamente 18 representantes de concejos municipales (de un total de 51 miembros), mientras que Portugal y las islas adyacentes tenían 158 representantes de concejos municipales (de un total de 438 miembros). Como se informó anteriormente, por cada distrito o cada territorio no dividido en distritos, el número de representantes en el Colegio Electoral es igual a la mitad del número de concejos municipales (cuando éste es un número impar, el número de representantes es la mitad del próximo número par). Además, en virtud de la ley electoral de 1963, se establecen concejos municipales únicamente en *concelhos* en que haya más de 500 electores calificados. Quizás ésta sea la razón por la cual estaban representadas menos de la mitad de las unidades administrativas de Angola (67 *concelhos* y 22 *circunscrições*).

b) Elecciones a la Asamblea Nacional

89. En las elecciones a la Asamblea Nacional, la Unión Nacional presentó una sola lista de siete candidatos. No hubo candidatos de oposición. Un artículo editorial de la prensa de Angola dijo que esto demostraba que en el Territorio no existían diferencias de opinión política acerca de la necesidad de defender el "patrimonio" de ultramar de Portugal. Instó al pueblo "a que votara en masa para gritar al mundo que Angola es Portugal, y que siempre será Portugal".

90. Sólo cuatro de los candidatos de la Unión Nacional eran nativos de Angola; los otros tres eran originarios de Portugal. Dos de entre los siete eran personas que ocupaban puestos oficiales en Angola (Secretario Provincial de Educación, Director de la Farmacia del Estado en Moçâmedes). Uno era representante de Angola en el Consejo Ultramarino, y simultáneamente miembro del Consejo Económico y Social de Angola y Director General de ANGOL. Entre los demás figuraban: un abogado que era Presidente de la Asociación Comercial de Lobito; un miembro del Consejo Económico y Social elegido por las empresas económicas del Territorio; un periodista que había sido enviado en misiones oficiales; un director de una importante compañía con intereses comerciales en el café, que era simultáneamente miembro del consejo de administración del Instituto del Café.

91. La propuesta de la oposición de Portugal de que los Territorios de Ultramar deberían tener el derecho de libre determinación fue denunciada por diversas personalidades públicas y editoriales de la prensa como una traición y un insulto al pueblo de Angola, que estaba sacrificando su vida y luchando por la grandeza de Portugal. Durante varios días la prensa publicó un mensaje que se transmitió también por la radio y en que se hacía un llamamiento a todos los portugueses de Angola a que afirmasen su lealtad a Portugal el 19 de octubre cubriendo todo el Territorio con la bandera portuguesa. El mensaje decía que en ese día todo vehículo, toda puerta y toda ventana debía enarbolarse la bandera de Portugal; que nadie debía dejar de hacerlo si era un portugués leal. Los periódicos de Lisboa dieron cuenta de la demostración del 19 de octubre calificándola de

expresión espontánea de la lealtad de Angola a Portugal y de condenación de toda relación con Portugal que no fuese la de una integración e identidad completas.

92. Los informes de la prensa acerca de las elecciones del 7 de noviembre decían que los centros de votación estaban atestados con filas de personas y con automóviles alineados al frente de ellos. No se publicaron cifras sobre el número de votantes registrados ni sobre el número de sufragios emitidos. Los resultados de la votación se dieron en forma de porcentaje de los votantes registrados que sufragaron. El periódico de Lisboa del 8 de noviembre daba un informe de Luanda en que decía "Podemos afirmar, sin una sombra de exageración, que votó toda Angola". Las cifras preliminares publicadas en la prensa mostraron que los porcentajes de votantes del electorado de Angola, distribuido por distritos, fue el siguiente: Cabinda, 84%; Cuando-Cubango, 91%; Luanda, 71,6%; Uíge, 95%; Benguela, 77,8%; y Malanje, 89,7%. Sin embargo, si se considera que aproximadamente sólo el 1% de la población total votó en Mozambique (véanse párrs. 146 y 147), es probable que el porcentaje de Angola fue de menos del 5% de la población total¹⁴.

93. En una declaración publicada el 11 de noviembre el MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) expresó que lo que la oposición portuguesa proponía era la libre determinación en una fecha fija para las colonias, con un gobierno de transición autónomo en que la mitad de los miembros serían portugueses que protegerían los intereses de sus compatriotas. Esto era inaceptable. El MPLA se opondría a "toda tentativa de implantar un sistema neocolonialista en Angola". La resistencia armada terminaría sólo cuando se estableciesen condiciones que garantizaran al pueblo de Angola el ejercicio del poder. Tales condiciones eran: i) reconocimiento del derecho a la libre determinación e independencia y a la soberanía nacional e internacional para Angola; ii) retiro de todas las fuerzas armadas a sus bases iniciales; iii) protección de la unidad e integridad territorial de la nación; iv) libertad incondicional de todos los presos políticos y repatriación a Angola de todos los refugiados y desterrados políticos; v) garantías para el ejercicio de los derechos democráticos y libertad para las actividades políticas y sindicales; vi) establecimiento de principios y garantías para la elección de un parlamento nacional basado en el sufragio universal, directo y secreto; vii) elecciones para los órganos del Gobierno en todas las ciudades.

c) Administración local

94. Como se informó anteriormente (A/5800/Rev.1, cap. V, párrs. 46 a 53), a raíz de estudios realizados en el Consejo Económico y Social y el Consejo Legislativo, se hicieron modificaciones en el curso del año en la estructura administrativa local del Territorio. A los consejos y comisiones municipales se les concedieron idénticas atribuciones y funciones y se suprimieron los puestos administrativos (*postos de circunscrição*). En el mes de diciembre el *Boletim Oficial de Angola* (No. 50) publicó una lista de las nuevas divisiones administrativas del Territorio que, según informaba, "imponían las necesidades demográficas o adminis-

trativas como consecuencia del progreso económico y social". Se crearon más de 20 nuevos *concelhos*, varios puestos administrativos se convirtieron en *circunscrições* y se establecieron los correspondientes concejos municipales y comisiones municipales. Se celebrarán nuevas elecciones para estos órganos.

La situación militar en Angola

95. Por los informes publicados y las declaraciones de funcionarios portugueses y de la prensa, es difícil averiguar cuál es la verdadera situación en Angola. Por una parte se pretende que la guerra de Angola ha terminado. Así por ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, haciendo uso de la palabra en la 1253a. sesión del Consejo de Seguridad, el 9 de noviembre de 1965, citó informes de visitantes, uno de los cuales describía a Angola como un país de "verdadera paz y progreso". Por el contrario, el Presidente de Portugal y otros funcionarios destacan ahora que Portugal está sosteniendo una guerra sobre tres frentes, en Angola, Mozambique y Guinea bajo administración portuguesa.

96. Casi todos los informes concuerdan en un punto, a saber, que hay todavía unos 50.000 soldados portugueses en Angola. En enero de 1966, por ejemplo, informó la prensa que "alrededor del perímetro de Luanda se extienden puestos militares unidos en ciertas secciones por millas de alambre, y alumbrados por reflectores en la noche. Para cruzar a sectores de importancia estratégica se necesitan puntos de inspección de tropas en los caminos que conducen hacia el interior, así como desfiladeros especiales". Los informes señalan también la constante preocupación que existe en el Territorio por las medidas políticas de seguridad. En marzo de 1966, por ejemplo, el Gobierno clausuró la Sociedad Cultural de Angola (*Sociedade Cultural de Angola*) declarando que había tolerado "infiltraciones" y actividades no previstas en su carta.

97. Además de las fuerzas armadas regulares, existen ahora no sólo el cuerpo de defensa civil y de voluntarios, la milicia y tropas locales (*forças de quadrícula*) sino una nueva fuerza de policía de seguridad pública compuesta por más de 7.000 hombres creada a fines de 1964. En 1965 se estableció en Luanda un centro de capacitación en comando de tropas que proporciona formación especializada mediante un curso de tres meses, al que sigue un mes de práctica.

98. En noviembre se formalizó la estructura del Cuerpo de Defensa Civil y de Voluntarios, cuya composición ha aumentado considerablemente. En virtud del Decreto No. 46.656 el Cuerpo está compuesto por personal permanente, general y especial. El personal permanente está formado por los jefes y comandantes del Cuerpo. El personal general está dividido en a) unidades de autodefensa y servicio, integradas por la población local, empleados públicos y empleados de empresas privadas; y b) *forças de intervenção* formadas por voluntarios, cuya tarea consiste en destruir las bandas armadas de guerrilleros.

99. Desde principios de enero el *Diário de Notícias* de Lisboa ha publicado una serie de artículos titulados "Tres frentes en tres meses. La verdad completa acerca de la guerra contra el terrorismo en los Territorios de ultramar". Los artículos describen acciones militares contra "terroristas" basados ya sea en relatos anteriores o en las propias observaciones del autor. Hablan del

¹⁴ Los requisitos para poder votar se exponen brevemente en A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 9.

aeropuerto militar de Luanda, dotado de más de 1.500 hombres, de la fuerza de helicópteros que busca a las guerrillas en la región de las selvas, de las tropas de paracaidistas a los cuales se traslada por avión a las zonas de actividades ... Acompañan a los artículos fotografías de ejercicios de capacitación en comando de tropas, de tropas que regresan de un día de campaña y de soldados heridos que se encuentran en el hospital militar de Luanda. Algunos de los artículos se ocupan de aquella parte del país donde se dice volvió la paz en 1961, y describen las aldeas recién colonizadas, dotadas de escuelas al aire libre cuando no existe edificio escolar, así como las actividades de los cuerpos de voluntarios o de los soldados estacionados en las fincas para protegerlas.

100. Parece que durante un periodo del año 1965 hubo una pausa en las actividades militares; un informe dijo que la acción militar contra los terroristas parecía haber llegado a un punto muerto. Ulteriormente, en el mes de agosto, la publicación *Gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil* (GRAE) informó que las tropas portuguesas estaban utilizando gases tóxicos y bombas napalm en una región situada a unas 80 millas al este de Luanda. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Portugal dijo, sin embargo, que en Angola no se habían utilizado productos químicos, que en la región mencionada no había habido actividad militar en 1965 y que la situación en Angola "se encontraba actualmente sometida a completo control".

101. Hacia fines de año los comunicados militares oficiales, publicados siempre semanalmente, empezaron a revelar intensificada actividad. El comunicado correspondiente a la semana del 29 de diciembre de 1965 al 5 de enero de 1966 llevaba el encabezamiento siguiente: "Actividad intensiva de las fuerzas armadas en Angola septentrional". Daba cuenta de actividades militares por tierra, aire y mar (en la región de Bula, Faisenda Riquinha, Camacume, Dungo, Menga, Mifume y Quinga) contra grupos de guerrillas cerca de la frontera y contra "la actividad criminal de facinerosos" en las regiones de Dambos y Uíge.

102. Es digno de señalarse que en mayo de 1965 a los residentes y agricultores de los distritos de Uíge, Zani, Cabinda y Cuanza septentrional se les exceptuó del pago de licencia para usar y cargar armas con fines de defensa, guerra y recreo (caza). (Angola, *Instrumento Legislativo*, No. 3.550 de 1º de mayo). En julio (*Instrumento Legislativo*, No. 3.560 de 10 de julio) esta disposición se hizo extensiva al distrito de Luanda, a los *concelhos* de Ambriz y Nambuangongo, a los puestos administrativos de Ucuá, Quicabo, Barra de Dande y al *concelho* de Dande.

Condiciones económicas

103. El periódico *Lusitania News Agency* informa en enero que el presupuesto de Angola para 1966, de casi 4.000 millones de escudos, es el más alto que haya tenido jamás el Territorio, y que habrá un saldo de excedentes de 5.500.000 escudos. El cálculo total de ingresos para 1966 es de 3.958.900.000 escudos, que excede sólo en 12.300.000 escudos al de 1965. Se ha registrado sólo un leve aumento en los ingresos ordinarios de 3.815.200.000 escudos en 1965 a 3.829.900.000 en 1966, pero los ingresos extraordinarios disminuyeron de 131.400.000 a 128.900.000 escudos. Por el contrario, en 1966 los gastos ordinarios

calculados han aumentado en 20 millones de escudos, de modo que el excedente previsto será de 5.300.000 escudos menos que en 1965.

104. Para 1966 se espera que los ingresos procedentes de empresas estatales y de participación en empresas privadas aumenten en 47.300.000 escudos, y los procedentes de impuestos directos en 51.700.000 escudos. No obstante el hecho de que en septiembre de 1965 se revisó el impuesto general mínimo (Despacho del Gobernador General, 4 de septiembre, *Boletim Oficial de Angola*, No. 200) y que se percibe en una proporción media de 200 a 250 escudos en la mayor parte de los distritos, y de 350 escudos en las zonas más desarrolladas económicamente, el cálculo de ingresos procedentes de esta fuente para 1966 es inferior en 100 millones de escudos al de 1965.

105. El presupuesto de Angola para 1966 prevé un cálculo de gastos de 626 millones de escudos para las fuerzas armadas, cifra que excede en un 30% al cálculo inicial correspondiente a 1965. La aportación efectiva hecha el año pasado por Angola a los gastos de defensa nacional de las fuerzas militares de ultramar fue de 554.900.000 escudos, o sea más o menos el 14% del cálculo total de gastos, destinándose 380.800.000 escudos al ejército, 52.100.000 a la armada y 122 millones a la fuerza aérea. De la cifra total, más o menos la mitad (282.600.000 escudos) procedía del ingreso ordinario del Territorio en conformidad con una disposición tomada en 1959 (Decreto No. 42.559); el 14%, del impuesto especial establecido en 1961 sobre servicios territoriales con presupuesto "autónomo"; el 7%, aproximadamente, de los excedentes del Territorio; el 20%, del impuesto revisado sobre utilidades establecido a fines de 1964; y el resto, del fondo de defensa y de los ingresos extraordinarios del Territorio.

106. El impuesto de defensa revisado sobre utilidades (Decreto No. 46.112 de 29 de diciembre de 1964) que entró en vigor en 1965, se aplica a individuos o compañías, nacionales o extranjeros, cuyas utilidades anuales excedan de 500.000 escudos. Se aplica a ingresos procedentes del comercio, industrias, bienes raíces urbanos o de explotación de recursos naturales. En virtud de disposiciones anteriores (Decreto No. 45.067 de 7 de junio de 1963) cuya aplicación produjo ingresos insuficientes, el impuesto se había aplicado solamente a compañías establecidas en el Territorio por más de cinco años, que realizasen utilidades de más de 1 millón de escudos y que estuviesen sujetas al impuesto industrial o de explotación, pero no se aplicaba a compañías exentas de impuestos a los ingresos en virtud de sus contratos. Los informes señalan que es posible que compañías tales como la Tanganyika Concessions, propietaria del Ferrocarril de Benguela, y anteriormente exenta, tengan que pagar ahora el impuesto a las utilidades. Otra de las innovaciones consiste en que el impuesto a las utilidades se aplica actualmente también a intereses y dividendos de 500.000 escudos o más, o que, agregados a utilidades procedentes de las demás operaciones enumeradas más arriba, proporcionan un ingreso superior a dicha suma. Como medio de asegurar la recaudación total del nuevo impuesto, el Gobierno de Angola ordenó en agosto (*Boletim Oficial de Angola*, No. 34, pág. 1143) que todas las compañías, ya fuesen extranjeras o portuguesas que operasen en el Territorio, dondequiera que estuviese ubicada su sede, deberían presentar una lista de

sus accionistas así como informaciones acerca del número de acciones en cartera y los intereses y dividendos pagados por la compañía.

107. Los gastos de defensa de Angola no se limitan a los créditos presupuestarios para las tres armas de defensa. El Cuerpo de Defensa Civil y de Voluntarios, por ejemplo, que constituye parte integrante de las fuerzas de defensa territoriales, se sostiene principalmente mediante impuestos especiales. Además, buena parte de los fondos de desarrollo de la infraestructura han sido asignados a proyectos de inmediata necesidad para la defensa, tales como aeropuertos, radiocomunicaciones, etc. Si bien Angola sufraga una amplia porción de los gastos de defensa con cargo a su presupuesto, parte de los gastos son también sufragados por el Gobierno de Portugal. En 1964 el Gobierno de Angola concedió un préstamo de 104 millones de escudos al Ministerio de Defensa de Portugal para la región militar local (Decreto No. 46.760 de 20 de diciembre de 1965).

108. Como se informó anteriormente, en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* con respecto a Angola se deberá hacer una inversión total de 7.210 millones de escudos distribuida en el período de tres años (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 62). Más o menos el 34% de dicha suma procederá de fuentes externas (con inclusión de 35 millones de dólares de los Estados Unidos para equipo, procedentes de un préstamo privado de la General Trade Co., empresa que tiene su sede en Ginebra, Suiza). De los 4.360 millones de escudos restantes, que deberán financiarse con "fuentes nacionales", 1.000 millones de escudos procederán de empréstitos otorgados por Portugal, el Gobierno de Angola proporcionará de sus ingresos la suma de 750 millones de escudos, 600 millones se recogerán con la emisión de bonos de desarrollo y 200 millones procederán de compañías financieras¹⁵ y 1.607.500 escudos procederán de inversiones privadas. Se espera que el Territorio financiará su cuota anual de 250 millones de escudos con cargo a: a) excedentes presupuestarios de 100 millones de escudos; b) una suma igual procedente del 2,5% de impuesto del Fondo de Desarrollo sobre las importaciones, y c) 50 millones de escudos procedentes del impuesto de exportación *sobrevalorização*, que se aplica principalmente al café¹⁶.

109. No se tienen todavía detalles completos sobre la ejecución del plano en 1965. Se informó en septiembre que para los gastos de desarrollo del año se asignaron créditos de los fondos del sector público por valor de 955 millones de escudos. Esta suma es superior en 11 millones de escudos al promedio de inversión anual previsto en el *Plano Intercalar de Fomento*, y se exigen mayores aportaciones de las propias finanzas de Angola de lo que se preveía al principio. No obstante la estrecha situación financiera y el pequeño excedente presupuestario del año anterior, los excedentes presupuestarios asegurarán 240 millones que, juntos con los 60 millones procedentes del impuesto *sobrevalorização* y 20 millones del Fondo de Desarrollo, aumentarán la contribución procedente de los propios recursos de Angola a 320 millones de escudos. Los 635 millones restantes se conseguirán en la forma

siguiente: 370 millones con empréstitos de Portugal, 65 millones de instituciones crediticias y compañías financieras y 200 millones de la emisión de bonos para el desarrollo.

110. Las asignaciones para los gastos de desarrollo ascendieron en 1965 a 1.040 millones de escudos distribuidos en la forma siguiente: para agricultura y crianza de ganado, 14%; carreteras, ferrocarriles, puentes y aeropuertos, 29%; desarrollo del Valle de Cune y de energía hidroeléctrica, 16%; industrias, 14%; sanidad, educación, bienestar social y radiocomunicaciones, 13%; estudios de recursos naturales, 8%; pesca, 3%, y mejoramiento de la vivienda local, 3%.

111. En su discurso de año nuevo, el Gobernador General señaló que la situación económica de 1965 no había realizado las expectativas; se había producido una baja en los precios de los productos agrícolas, las exportaciones de petróleo y las de hierro alcanzaron un nivel inferior al de 1964, y el Territorio siguió sufriendo por la situación cambiaria (*a pressão cambial*).

112. No están todavía disponibles las estadísticas detalladas sobre comercio y producción correspondientes a 1965. Los informes señalan que en comparación con el año anterior, la producción de café bajó en un 16% debido al mal tiempo, la de sisal se mantuvo al mismo nivel, pero mejoró un poco la producción de maíz, algodón, semillas oleaginosas y tabaco, y se informó que la producción azucarera ascendió a más o menos 70.000 toneladas métricas, en comparación con 68.200 en el período 1963-1964, y 73.200 del período 1962-1963. Según algunas fuentes, se espera que la cosecha de 1966 produzca mayores ganancias como resultado de los nuevos esfuerzos realizados en los últimos años para aumentar la producción agrícola.

113. Conviene señalar que si bien el *Plano Intercalar de Fomento* atribuye mayor importancia a la expansión de la agricultura africana, no se prevén grandes inversiones en este sector. El Gobierno espera estimular la producción africana de cultivos tales como el maíz y el algodón, principalmente mejorando para los productores el precio de dichos artículos, que hasta ahora ha sido bajo, y disminuyendo los derechos de exportación sobre tales productos. Como estas medidas tendrían como consecuencia disminuir el ingreso territorial, se previó al principio alzar en julio de 1965 los derechos de exportación sobre el café y el sisal, y establecer ciertos impuestos sobre bienes de consumo como compensación por la pérdida prevista, pero dichas medidas se suprimieron más tarde cuando se vio que la exportación de esos dos productos fueron menos estimulantes de lo que se había esperado. Sin embargo, se ha vuelto a introducir un nuevo impuesto sobre bienes de consumo.

114. En el sector minero, se espera que un aumento de la producción de diamantes en 1965 equilibre la más baja producción de hierro, petróleo y sal. La producción total de diamantes alcanzó a 1.149.068 quilates en 1964, y la Angola Diamond Company informó de una utilidad de 192.300.000 escudos, que permitió pagar un dividendo de 110 escudos por acción. (Las acciones tienen un valor nominal de 170 escudos.) Se informó que el valor de los diamantes producidos en los diez primeros meses de 1965 ascendía a 74 millones de escudos más que en el período correspondiente de 1964.

115. Existe constante interés en la prospección de diamantes. En los primeros nueve meses de 1965 se

¹⁵ *Participação privada no capital das previstas sociedades de financiamento e de desenvolvimento* (véase *Plano de Fomento*).

¹⁶ Este impuesto se cobra sobre la diferencia del actual precio de exportación de ciertos productos básicos en comparación con el precio de 1949.

registraron 25 nuevas peticiones de concesiones de prospección. Se otorgó una nueva concesión a la Sociedade Angola de Pedras Preciosas e Diamantes (DIPERA), que es una compañía portuguesa. La concesión otorgada a la South African Angola Exploration Company fue revocada en abril (Orden No. 21.220 de 14 de abril) por no haber cumplido con las condiciones estipuladas.

116. La producción de petróleo crudo aumentó de 800.000 toneladas en 1963 a 905.000 toneladas en 1964, pero no alcanzó a la cifra prevista de 1 millón de toneladas (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 55). Las exportaciones de petróleo crudo ascendieron a un total de 361.000 toneladas (en comparación con 318.000 en 1963), de las cuales 292.000 se destinaron a Portugal donde se ha establecido una nueva refinería, y 70.000 a países extranjeros. A principios de 1965 el Gobierno ordenó que todo exceso de petróleo combustible que se produzca en la refinería de Luanda debe ser absorbido por el mercado interno de Portugal. Se informó, sin embargo, que la producción de petróleo crudo disminuyó durante el año a 700.000 toneladas, por razones de carácter técnico.

117. A fines de 1965 Petrangol firmó un nuevo contrato con el Gobierno de Portugal (Decreto No. 46.822 de 31 de diciembre). Este contrato reemplaza todos los anteriores y se informa que, en consecuencia, se cancelará también el contrato de Petrofina con Petrangol como compañía concesionaria asociada¹⁷. Petrangol está autorizado para aumentar su capital de 150 a 900 millones de escudos y se ha extendido hasta 1970 la duración de su contrato. Petrangol emprenderá la inversión de 1.250 millones de escudos en la prospección y explotación de nuevos depósitos, con un promedio anual de 100 a 150 millones de escudos que se invertirán en la concesión distrital de Cuanza, y 50 millones en su concesión en el distrito del Congo. La compañía podrá disminuir los gastos anuales sólo con la aprobación del Gobierno y a condición de que las reservas descubiertas no sean inferiores a 75 millones de toneladas. El Gobierno percibirá una regalía del 12,5% sobre el valor nominal del petróleo extraído, así como el 50% de las utilidades de Petrangol y de aquellas compañías que operan "conjuntamente" con ella. El Gobierno controla la selección de tales compañías. El Gobierno recibirá una bonificación de 30 millones de escudos al firmarse el contrato, una suma anual de 1 millón de escudos que se pagará al Fondo de Desarrollo Minero que deberá crearse, y recibirá asimismo dos préstamos, uno de 250 millones de escudos al 4% de interés por tres años, y otro de 40 millones de escudos sin interés alguno y por diez años.

118. En el curso del año circularon informes contradictorios con respecto a la capacidad y posibilidad de que Angola suministre petróleo a Sudáfrica y Rhodesia del Sur. En octubre de 1965, el *Diário de Notícias* de Lisboa, publicó un informe procedente de Lourenço Marques, según el cual una fuente bien informada de Johannesburg había revelado que estaban progresando las negociaciones de suministro de petróleo de Angola a Sudáfrica, y que la entrega de petróleo comenzaría pronto. Un funcionario de Petrofina en Bruselas declaró en noviembre que "por razones de técnicas y contractuales" Petrangol no podría suministrar petróleo

a Rhodesia del Sur en el caso de que se aplicasen sanciones. Se informa que la participación de la General Mining Corporation en una empresa bancaria mixta con Portugal (véase más arriba el párrafo 50) constituye una señal del constante interés de la Federale Mynbou Beperk en el petróleo de Angola, ya que las dos compañías están íntimamente relacionadas.

119. Alfred Krupp hizo una visita durante el año a Angola donde su compañía participa en la explotación de las minas de hierro de Cassinga en virtud de una concesión de la Companhia Mineira do Lobito (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párr. 207). Se han concedido privilegios arancelarios especiales a la maquinaria y equipo que se utilizarán en las minas de Cassinga, y en relación con este mismo proyecto se ha establecido un nuevo órgano oficial encargado de coordinar el desarrollo de carreteras, ferrocarril y facilidades portuarias en Moçamedes. En junio de 1965 (Decreto No. 46.372) el Gobierno de Portugal concedió su garantía a un préstamo por 1.300 millones de escudos contraído previamente por la Companhia Mineira do Lombige y la Sociedade Mineira do Lombige con el consorcio encabezado por Krupp (de Essen, Alemania). Se informa que la Yamata Iron and Steel Company del Japón ha concertado ya un acuerdo por 6 millones de toneladas de mineral de hierro que se entregarán en seis años, a un precio convenido de 8,14 dólares por tonelada c.i.f. Japón. En 1965 se informó que firmas industriales japonesas, garantizadas por el Banco del Japón, estaban dispuestas a invertir hasta 120 millones de dólares de los Estados Unidos en Angola para el establecimiento de una industria de metales.

120. A raíz de informes publicados en 1964 acerca del descubrimiento de nuevos depósitos de manganeso, níquel y platino en la Bahía de los Tigres, se descubrieron depósitos de cobre en 1965 cerca del río Mina en el distrito de Benguela. Se pudo exportar fácilmente el mineral debido a que los depósitos de cobre se encuentran relativamente cerca del ferrocarril de Benguela.

121. Se ha formado una nueva compañía minera para la explotación de los depósitos de manganeso en el distrito de Moxico. La recién fundada Sociedade Mineira do Cassai Lda. colaborará con el Spanish Steel Group y espera producir 100.000 toneladas anuales durante diez años. Las empresas españolas financiarán los gastos de equipo, construirán un ramal de 70 kilómetros de ferrocarril y suministrarán el material rodante. Se informa que tienen interés en la compra del mineral de manganeso diversas compañías de los Estados Unidos de América, Sudáfrica y República Federal de Alemania.

122. Fuera de las inversiones en el sector minero, se informó durante el año acerca de varias otras inversiones extranjeras. Una de ellas consiste en una inversión de 130 millones de escudos que haría la Interamerican Capital Corporation of New York para la estación de energía hidroeléctrica del Alto Catumbela. Esta empresa ha financiado otros proyectos en Angola, entre los cuales figuran proyectos de carreteras, el proyecto del aeropuerto de Luanda y proyectos de factorías. Financia asimismo el Sal Airport en las islas de Cabo Verde. El Presidente de la Interamerican es el Sr. Frederick J. Evans, Presidente también de la Evans and Dell Company que ha proporcionado todo el equipo y material de construcción necesarios.

¹⁷ Véanse detalles de las relaciones de Petrangol con Petrofina en A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párrs. 179 a 181.

123. Durante el primer semestre de 1965, el tráfico en el ferrocarril de Benguela a través del puerto de Lobito fue igual al de todo el año anterior. En vista del aumento de los cargamentos, la empresa Tanganyika Concessions Ltd. anunció a principios de 1966 un plan encaminado a duplicar en dos años la capacidad del sector occidental del ferrocarril de Benguela, de 1.500.000 a 3 millones de toneladas anuales, a un costo de 5 millones de libras esterlinas. Se incluye en el plan la construcción de una segunda línea entre Cubal y Lobito. El ferrocarril de Benguela tiene actualmente una sola vía y funciona con locomotoras a leña. Al contrato de concesión concedido a la compañía para la explotación del ferrocarril le quedan todavía 35 años más de duración.

124. Desde 1962 a 1964 se ha registrado anualmente un promedio aproximado de 1.300 nuevas industrias de transformación. El capital invertido anualmente ha alcanzado un promedio aproximado de 150 millones de escudos y suministrado empleo para una cifra adicional de 3.500 personas por año. A fines de 1964 había un total de 17.316 empresas que representaban juntas una inversión de 2.560 millones de escudos y empleaban unas 58.000 personas. Entre las nuevas inversiones ya hechas o previstas en las industrias de transformación figuran 200 millones de escudos de la Companhia de Celulose, principalmente para pulpa de papel; 138 millones de escudos para la manufactura de lingotes de hierro (*ferro-ligas*); 250 millones de escudos para una fundición y trabajos de metal laminado, y la industria de aluminio ya citada que se estableció con un capital de 10 millones de escudos, pero que puede aumentarlo a 500 millones de escudos. Entre las nuevas industrias que según los informes se establecieron en 1965 figura una fábrica de cuerda de sisal que representa una inversión de 30 millones de escudos, denominada Companhia de Fiação e Cordoaria de Angola (COFIANG), creada por un grupo de empresas de sisal en el distrito de Benguela; la inversión de 95 millones de escudos hecha por la Companhia do Açúcar de Angola con el fin de aumentar la capacidad de sus fábricas de Donde y Loge; el establecimiento de una nueva fábrica de neumáticos, denominada Mabor, con un capital registrado de 60 millones de escudos que puede aumentarse a 150 millones; una nueva planta para la construcción de tractores y demás maquinaria agrícola; una nueva industria de fabricación de bicicletas y motocicletas; una fábrica de cerillas (15.700.000 escudos); una fábrica de levadura establecida por un grupo holandés que tiene ya inversiones en Portugal; una planta sueca de montaje de automóviles; una industria mixta franco-angolana de fabricación y embotellado de vino; una planta de fertilizantes (50 millones de escudos); una fábrica de baterías (300 millones de escudos); una industria de fabricación de explosivos mineros y una fábrica de hilados de algodón.

125. Los mayores aumentos de producción en las industrias de transformación se registraron en la cerveza (que tuvo un aumento de 3.700.000 litros en los diez primeros meses), harina, galletas y bebidas gaseosas. Dichas ventajas, que se refieren principalmente a los bienes de consumo no esenciales, podrían atribuirse a un mejoramiento del nivel de vida, y también, por lo menos en parte, al aumento de tropas procedentes de Portugal y a los colonos europeos. (En 1965 se calculaba que la población total de Angola ascendía a 5.500.000 habitantes, de los cuales 300.000

eran europeos.) Hubo aumentos en la producción de textiles y petróleo refinado, que representan, respectivamente, la décima y la tercera parte de la producción industrial total. Aumentó también la producción de productos químicos y de cemento.

126. No obstante estos aumentos Angola sigue dependiendo de Portugal con respecto a una amplia variedad de importaciones tanto de productos duraderos como no duraderos. Durante los primeros nueve meses del año la balanza comercial desfavorable fue de 1 millón de escudos más que en el período correspondiente de 1964, debido a que simultáneamente aumentaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones. Como consecuencia de ello, se produjo una deterioración en la balanza de pagos de Angola. Hacia fines de año apareció en la prensa de Angola una serie de editoriales sugiriendo que se deberían restringir de nuevo las importaciones.

127. En un discurso pronunciado en noviembre con motivo de la inauguración de una nueva fábrica de sisal, la COFIANG, el Secretario de Economía Provincial de Angola aprovechó la oportunidad para explicar que la deterioración de la balanza comercial se debía principalmente a importaciones esenciales, que cualesquiera restricciones que se impusiesen a las importaciones afectarían necesariamente al nivel de vida del Territorio y tendrían efectos desfavorables sobre la economía de Portugal y la capacidad tributaria de la nación (*capacidade tributária da Nação*).

128. A principios de este año el Gobierno de Angola publicó una declaración más detallada sobre la situación comercial. Señaló que en virtud de las leyes existentes, que regulan la integración económica del dominio de Portugal (*espaço português*), Angola no podía tomar medidas para restringir las importaciones procedentes de otros territorios "nacionales"; tales medidas sólo podía tomarlas el Consejo de Ministros de Asuntos Económicos de Lisboa por períodos limitados, después de consultar a los órganos competentes, especialmente al Fondo Monetario de la zona del escudo (*Fundo Monetário da Zona do Escudo*). Angola no podía tampoco tomar medidas contra países extranjeros con los cuales Portugal había concertado acuerdos comerciales especiales, como por ejemplo los países de la EFTA y del GATT.

129. La declaración oficial señalaba que durante el período transcurrido desde enero hasta agosto de 1965, y en comparación con el mismo período de 1964, las importaciones de bienes de consumo esenciales aumentaron en 205 millones de escudos, las de bienes de consumo no esenciales en 71 millones, y las de bienes de producción en 440 millones. De las importaciones de bienes de consumo esenciales, sólo 37 millones tenían por objeto bienes duraderos, principalmente unidades refrigeradoras, y de las importaciones de bienes no duraderos casi las dos terceras partes habían sido de ropa, una quinta parte de alimentos y un 12% de medicamentos. De la importación de bienes de producción, el 55% fue para equipo y el 45% para materias primas diversas, productos intermedios o semimanufacturados. El Gobierno declaró que como la balanza comercial desfavorable se debía principalmente a necesidades de producción, el efecto sobre la balanza de pagos equivalía a pagar a un bajo precio el futuro crecimiento económico del Territorio. Con las nuevas industrias que el Territorio podría crear en virtud del nuevo reglamento, incluso las fábricas de textiles, den-

tro de algunos pocos años Angola se bastaría más fácilmente a sí misma y podría mejorar la situación de su balanza de pagos.

130. Según el estudio del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*, en 1962 las transferencias invisibles de Angola ascendieron a 576 millones de escudos (121 millones de los cuales representaban transferencias de utilidades, y 455 millones transferencias privadas). Según un informe, las transferencias de invisibles hechas a Portugal en 1965 por concepto de arriendos, utilidades y gastos de mantenimiento de oficinas, que por sí solas ascendieron a unos 808 millones de escudos, habían acarreado dificultades a la balanza de pagos. En julio de 1965 se informó que se preveían nuevas medidas de control de cambios para todas las transferencias de más de 60.000 escudos, con inclusión de las efectuadas dentro de la zona del escudo, todas las cuales deberían someterse al Consejo de Cambios (*Conselho de Câmbios*) de Luanda.

Concesión y colonización de tierras

131. Como se ha informado ya (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 73 a 79), con la llegada de nuevos colonos de Portugal desde mediados del decenio de 1950 para adelante, se desintegraron los métodos de concesiones de tierras. Una de las principales causas fue la falta de personal apropiado para supervisar las zonas en que habían de otorgarse concesiones. Los servicios de investigación geográfica y catastral de los Territorios se reorganizaron ulteriormente, y en octubre de 1965 se nombró en Angola un nuevo inspector de investigación catastral. En esa oportunidad, el Secretario Provincial para el Desarrollo Rural señaló que durante el decenio de 1950 a 1959 se recibieron 13.000 solicitudes de concesiones, y que a fines de diciembre de 1964 había 14.769 solicitudes de concesiones pendientes de decisión. Declaró que si bien algunos de los atrasos se debían a los solicitantes mismos, que no contestaban al pedirseles más informaciones, era necesario que el Gobierno tomase medidas para hacer frente a la situación. Declaró que los grupos de inspección tenían una importante función que desempeñar al ayudar a los concesionarios a cumplir con sus obligaciones. Sus funciones tendrían una especial importancia en las zonas rurales donde la inobservancia de la ley se debía a menudo a que los habitantes apenas si tenían medios de conocerla, y sólo se podría imponerla estrictamente cuando estuviesen mejor informados. En las zonas urbanas era necesario también apresurar los trámites de entrega de gráficos a los órganos oficiales locales con respecto a las tierras que quedaban dentro de la esfera de su competencia.

132. Como se señaló anteriormente (párrs. 72 a 77) se ha estado examinando en Lisboa el problema total

de intensificar la colonización en los Territorios de Ultramar, de reorganizar los servicios de colonización y las funciones de las Juntas de Colonización Provincial de Angola y Mozambique. En la visita que hizo a Lisboa en el mes de febrero, el Gobernador General de Angola declaró que, no obstante sus defectos y errores, la Junta de Colonización Provincial de Angola era en realidad el órgano de mayor experiencia en todo el país en asuntos relativos a población, reorganización (*reordenamento*) y asentamiento de personas procedentes de diversas partes de la nación. Agregó que si bien el suelo de Angola no era el más fértil, ofrecía abundante trabajo para todos los que viniesen. (Sin embargo, el presupuesto de 1966 para la Junta de Colonización Provincial de Angola es de sólo 145 millones de escudos, en comparación con 160 millones en 1965.)

133. Dada la frecuencia de los terremotos en las Islas Azores, el Gobierno de Portugal ha trazado planes para el asentamiento de familias procedentes de esas islas en Angola. Se está asentando en Angola un nuevo grupo de 60 familias que comprende unas 356 personas. Veinte de esas familias serán asentadas en Cela y 40 en la zona de Bela Vista. Dichas familias se dedicarán a la industria lechera.

134. En una publicación oficial de 1965 apareció una nueva propuesta para el establecimiento de soldados: colonos en "colonias defensivas" de Angola. Entre las principales zonas que se sugieren para dichas colonias figuran la frontera septentrional y otras ubicaciones estratégicas unidas por redes importantes de transporte. Se calcula que el costo de asentamiento de cada familia será de 200.000 escudos.

Educación

135. Un folleto publicado por los servicios educacionales provinciales de Angola describe con algún detalle el actual sistema escolar y la organización de los servicios educacionales territoriales. Los datos estadísticos que figuran en el folleto muestran que entre el año escolar 1960-1961 y 1962-1963 el número de escuelas primarias fiscales y particulares aumentó de 2.011 a 2.329; el número de maestros de 2.890 a 3.356; el de alumnos de 105.781 a 123.641; los gastos de educación aumentaron de 35.500.000 escudos en 1961 a 62 millones en 1963. Se calcula que para 1966 los gastos de los servicios de educación ascenderán a 242 millones de escudos. Se asignan además 22.500.000 escudos a los *Estudos Gerais Universitários* y 31.200.000 como subsidio a las misiones católicas.

136. A continuación se exponen las últimas estadísticas escolares correspondientes al año escolar 1963-1964, que precedió a la unificación del sistema primario (véase A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 37 a 41):

ESTADÍSTICAS ESCOLARES DE ANGOLA, 1963-1964

Tipo de escuela	Número	Número de maestros	Número de alumnos	Gastos en millones de escudos
Adaptación	1.241	1.954	98.615	...
Primaria	50.000 ^a	...
Profesional elemental	7	100	2.094	...
Primaria técnica	24	460	10.205	27,7
Liceu (secundario)	51 ^b	542	10.403	20,9

Tipo de escuela	Número	Número de maestros	Número de alumnos	Gastos en millones de escudos
Capacitación profesional pos-primaria (medio): Industrial y Comercial	4	53	208	...
Capacitación del maestro primario (escolas de magistério primário)	3	...	97	...
Estudos Gerais Universitários .	—	...	273	...

^a Cifra basada en la información correspondiente a 1964 en que la matrícula primaria total alcanzó aproximadamente a 150.000 alumnos.

^b Nueve públicas y 42 particulares.

137. El nuevo sistema de escuela primaria "unificada" se implantó en 1964-1965; no se dispone todavía de estadísticas detalladas. En 1965 en doce de los distritos se crearon 485 "puestos escolares" (*postos escolares*). (El puesto escolar comprende los tres primeros grados primarios y la clase preparatoria de enseñanza del lenguaje.) Once puestos escolares se elevaron además al nivel primario elemental (con cuatro sobre los cinco grados primarios). Los puestos escolares se distribuyen en los distritos en la forma siguiente: Benguela, 35; Bié, 45; Cabinda, 56; Cuando Cubango, 12; Cuanza septentrional, 64; Cuanza meridional, 39; Huíla, 14; Lunda, 56; Malanje, 3; Moxico, 28; y Uíge, 23.

138. Con la expansión de los puestos escolares rurales como medio de eliminar el analfabetismo, se ha producido un renovado interés en la capacitación de una élite, y el suministro de los servicios necesarios. En el curso del año se establecieron algunas nuevas escuelas posprimarias y secundarias. Hasta septiembre de 1965 figuraban entre éstas un *liceu* (escuela secundaria académica); dos escuelas técnicas elementales en Henrique de Carvalho y en Cubal; la escuela técnica elemental de Novo Redondo fue elevada a la categoría de escuela industrial comercial, lo mismo que la escuela comercial de Lobito.

139. Según las informaciones que figuran en el *Plano Intercalar de Fomento*, en el período 1953-1962, el promedio de aumento de la matrícula de las escuelas secundarias, con inclusión de las escuelas académicas y técnicas, fue del 16% anual. Se previó que con la ampliación de la enseñanza primaria, el número de alumnos secundarios sería de 26.000 en 1967-1968; 46.000 en 1972-1973 y 82.000 en el año escolar 1977-1978. Se espera que más o menos la mitad de este total de estudiantes se hallará en las escuelas secundarias académicas. El *Plano Intercalar de Fomento* prevé en consecuencia que el Territorio necesitará 58 escuelas secundarias para el período 1967-1968, aumentando a 102 y 136, respectivamente, en los dos períodos quinquenales siguientes. En la suposición de que la población total de Angola sea de 5.500.000 habitantes en 1967-1968, la tasa de matrícula secundaria será entonces de más o menos un escolar por cada 2.000 habitantes.

140. El principal objetivo de los *Estudos Gerais Universitários de Angola* iniciados en 1963 (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 102), como lo señaló en 1965 el Ministro de Educación Nacional al visitar el Territorio para la inauguración del nuevo año escolar, consiste en crear el personal docente de categoría superior para la preparación del personal técnico calificado que se

necesita. Los cursos se dan en tres centros. Los cursos de capacitación en medicina y cirugía y una extensa variedad de cursos de ingeniería se dan en Luanda, donde existe también un laboratorio nacional para ingeniería civil. La escuela superior para estudios de veterinaria y el instituto superior de agronomía se encuentran en Nova Lisboa, y durante el año se agregaron nuevos cursos de agronomía. Los cursos de capacitación de maestros profesionales técnicos, así como los de agricultura y silvicultura se dan en Sá da Bandeira. Ulteriormente se agregará un centro para el estudio de Humanidades.

Sanidad pública

141. El *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* relativo a Angola, a la vez que prevé la expansión de los servicios médicos disponibles, destaca principalmente la importancia de la medicina preventiva y de otras medidas para el mejoramiento de la salud pública. Entre ellas figuran campañas especiales, mayor capacitación del personal técnico, educación sanitaria y medidas contra las enfermedades transmisibles. Los gastos anuales previstos en virtud del *Plano de Fomento* ascienden a unos 80 millones de escudos.

142. En 1965 se iniciaron los trabajos encaminados a ampliar el hospital de Luanda. La primera etapa prevé un gasto de 23 millones de escudos y un aumento de 300 camas; la segunda etapa costará 50 millones de escudos y elevará la capacidad total del hospital a 1.000 camas. Se están construyendo dos nuevos hospitales rurales, uno en Vila General Machado, y el otro en Vila Teixeira de Sousa.

143. El presupuesto de 1966 para Angola indica que los servicios médicos del Gobierno contaban con dos hospitales centrales, 13 hospitales regionales, tres hospitales subregionales, 57 hospitales rurales, 97 delegacias sanitarias y 258 puestos sanitarios. El cálculo de gastos de los servicios sanitarios asciende a 200.400.000 escudos.

3. Mozambique

Evolución constitucional y política

a) Elección del Jefe de Estado

144. Aunque la prensa local publica una lista de 52 nombres de personas, Mozambique estaba representado oficialmente por 51 miembros en el Colegio Electoral que eligió al Jefe de Estado (véase párrs. 13 a 17 *supra*). Dicha representación la integraban siete di-

putados a la Asamblea Nacional, dos miembros de la Cámara Corporativa, 24 miembros del Consejo Legislativo elegidos dentro de dicho órgano y 18 representantes de concejos municipales.

145. Conviene observar que Mozambique, que en 1960 contaba con una población total de 6.600.000 habitantes, tenía el mismo número de representantes que Angola, con una población de 4.800.000, mientras que Portugal y las islas adyacentes que cuentan con una población de 8.900.000 habitantes, tenían 438 representantes.

b) Elecciones a la Asamblea Nacional

146. En la elección de siete diputados de Mozambique para la Asamblea Nacional, celebrada el 7 de noviembre de 1965, votaron 64.034 personas que representaban el 87,17% del electorado inscrito.

147. Los requisitos necesarios para votar en las elecciones a la Asamblea Nacional se exponen brevemente en el informe anterior del Comité Especial (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 9), donde se señaló que las dos exigencias alternativas, esto es, saber leer y escribir para los portugueses o el pago de una cantidad mínima de ciertos impuestos, solían limitar el número de indígenas con derecho a voto. Los resultados demuestran que de una población calculada en más de 6.600.000 habitantes (con inclusión de 97.000 europeos y 31.000 *mistos*)¹⁸ sólo se inscribió el 1,1% y prácticamente votó menos del 1%. El cuadro siguiente expone el número de votantes en cada distrito, en comparación con el cálculo de población de 1960:

¹⁸ Estas cifras son cálculos provisionales correspondientes a 1960 publicados en el *Anuário Estatístico* de 1963. Según cálculos extraoficiales la población europea había aumentado a 150.000 en 1965.

POBLACIÓN^a

Distrito	Número de votantes	Total	Europeos	Porcentaje de votantes con respecto a la población total
Cabo Delgado	2.979	542.165	1.482	0,5
Gaza	5.652	675.150	7.422	0,8
Inhambane	3.982	583.722	1.913	0,7
Lourenço Marques	17.892	441.363	48.182	4,0
Manica e Sofala	14.801	781.070	19.668	1,9
Moçambique	9.016	1.444.555	8.074	0,6
Niassa	1.512	276.810	992	0,6
Tete	2.663	470.100	2.169	0,6
Zambézia	5.546	1.363.619	7.436	0,4

^a Las cifras demográficas se refieren al año 1960 (cálculo provisional).

148. Lo mismo que en Angola, los resultados de las elecciones, en las que no hubo candidatos de oposición, fueron saludados como "una ratificación de la confianza del pueblo en la política de defensa intransigente del Territorio nacional". El período de campaña pre-electoral se había dedicado sobre todo a debatir públicamente el manifiesto publicado por la oposición de Portugal, principalmente la propuesta de libre determinación de los Territorios de Ultramar, que numerosos comentarios de prensa, declaraciones de personalidades públicas y cuerpos organizados, y en concentraciones públicas en masa, había sido denunciada como "una tentativa traicionera encaminada a desintegrar a la nación portuguesa".

149. De los siete candidatos de la Unión Nacional organizada por el Gobierno que fueron elegidos sin oposición, sólo tres habían nacido en Mozambique, otros tres eran originarios de Portugal y uno de Macao. Tres fueron elegidos como diputados, y un cuarto era ya miembro del Consejo Ultramarino. Por lo que se refiere a sus ocupaciones, figuraban entre ellos un hombre de negocios y un productor de sisal, un maestro de escuela secundaria, un abogado, un doctor en medicina, dos directores de empresas, uno de ellos director de la Companhia do Boror, de la Sociedade de Estudos e Investimentos de Moçambique y de la Companhia Industrial de Fundação e Laminagem (CIFEL), así como miembro del Consejo Legislativo,

y el séptimo era un antiguo jefe ejecutivo de la Sociedade Hidroeléctrica do Revuê y actualmente presidente del concejo municipal de Beira.

La situación militar en Mozambique

150. Como se señaló en el informe de 1965 del Comité Especial (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 83 a 86), desde septiembre de 1964 ha habido luchas entre fuerzas armadas portuguesas e insurgentes dirigidos por el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), cuando éste declaró una insurrección en el Territorio.

151. La lucha consiste en una guerra de guerrillas y es difícil determinar la verdadera situación debido a que los informes son contradictorios. Según los boletines militares portugueses, las hostilidades se habían limitado a choques con pequeños grupos armados de guerrillas en zonas limitadas de las partes septentrional y noroeste del Territorio, cerca de la frontera de Tanzania, y más recientemente en el distrito de Tete sobre el límite con Zambia. Según estos informes, las principales zonas de actividad de los insurgentes son la meseta de Maconde, situada entre los ríos Rovuma y Messalo y el país adyacente al lago Nyassa. A principios de 1965 se informó que se luchaba en la región de Milange, pero se dice que las fuerzas insurgentes en esta región han sido exterminadas. Por el contrario, fuentes del FRELIMO declararon en octubre y di-

ciembre que se luchaba en una amplia extensión y que las vastas regiones de Mozambique septentrional estaban bajo su control.

152. De los informes se desprende que la lucha, que consistía principalmente en choques en pequeña escala, fue esporádica al principio, pero se hizo más frecuente después de mediados de 1965 cuando las fuerzas portuguesas, que ascendieron a 20.000 hombres bajo un comandante recién nombrado, el Brigadier General António dos Santos, iniciaron extensivas operaciones militares y aéreas desde una cadena de bases mixtas aéreas y terrestres establecidas desde 1961 cerca de la frontera septentrional de Cabo Delgado y distritos de Nyassa. Parece que las fuerzas portuguesas fueron reforzadas durante el año. En el mes de agosto el comandante militar portugués declaró en una entrevista de prensa que las fuerzas armadas del Territorio, integradas posiblemente por militares, policía móvil y milicia, tenían entre 40.000 y 50.000 hombres, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 25.000 que según se dijo tenían el año anterior. En noviembre de 1965 y febrero de 1966 la prensa informó que se habían agregado nuevos y considerables refuerzos, pero el último informe fue negado en Lisboa.

153. Desde más o menos el mes de septiembre de 1965 hasta ahora fuerzas portuguesas integradas por paracaidistas, fusileros especiales (cuerpo selecto de comandos, especialmente capacitado), policía y milicia, apoyados por acción aérea, han estado desarrollando una serie de operaciones combinadas con el fin de descubrir la pista de grupos de guerrillas en la zona del Río Massalo, cerca de la frontera de Tanzania, y en la zona de Maniamba cerca del lago Nyassa. Se agrupa a la población local en colonias especialmente organizadas en aldeas (*aldeamentos*), defendidas por destacamentos militares, a la vez que se ubica cerca de centros militares los campamentos de africanos "recuperados" de los cuales se sospecha que prestan ayuda a las guerrillas. Como resultado del aumento de las operaciones militares, se han hecho más frecuentes los choques, como puede juzgarse por los informes contradictorios de ambas partes con respecto a las bajas. Según fuentes oficiales portuguesas, las bajas militares portuguesas ocurridas entre el comienzo de las hostilidades en 1964 y marzo de 1966 fueron 85, aunque se aseguraba que en el mes de enero de 1966 solamente 187 insurgentes habían sido muertos, heridos o capturados. Por el contrario, un comunicado de FRELIMO afirmaba que en el mes de enero las tropas portuguesas tuvieron 100 bajas entre muertos y heridos, en comparación con ocho bajas de los insurgentes.

154. A los disturbios ocurridos en estas zonas septentrionales acompañaron a fines de 1964 y principios de 1965 considerables movimientos de refugiados africanos, primero a través del río Rovuma hacia Tanzania y ulteriormente, en grupos más reducidos, hacia Malawi y Zambia. Como se informó anteriormente (*ibid.*, párr. 86) los refugiados en Tanzania recibieron atención en campamentos por parte de las autoridades de Tanzania, asistencia que fue complementada por el Programa Mundial de Alimentos que patrocina las Naciones Unidas y la FAO. En julio de 1965, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados anunció que se había firmado un acuerdo tripartito con el Gobierno de Tanzania y el servicio de refugiados cristianos en Tanganyika para el asentamiento de 10.000 refugiados en Rutamba al sur de Tanzania. El

proyecto se completaría en tres años y costaría un total de 1.800.000 dólares. El Gobierno de Tanzania proporcionaría por lo menos tres acres por unidad familiar y suministraría bienes y servicios por valor de 43.000 dólares. El Programa Mundial de Alimentos patrocinado por las Naciones Unidas y la FAO proporcionarían productos básicos por valor de 500.000 dólares. Se pidió al Alto Comisionado que contribuyese con 412.300 dólares, y entidades religiosas y de otro carácter proporcionarían 278.000 dólares.

155. En julio de 1965 se informó que unos 2.000 refugiados procedentes del distrito de Nyassa se habían albergado en un centro misionero de la isla Likoma en Malawi, e informaciones posteriores señalaron que su número había aumentado a más de 3.000 en septiembre, si bien muchos refugiados habían regresado ya a Mozambique. En febrero de 1966 se informó en la prensa que unos 3.500 refugiados fueron albergados en dos campamentos del Gobierno al oriente de Zambia.

Medidas de seguridad

156. A principios de 1965 varios periódicos no portugueses informaron que en Mozambique se habían hecho arrestos en gran escala por razones políticas. Tales informes fueron oficialmente refutados por el Gobierno, el cual, sin embargo, admitió que ocho personas, entre las cuales figuraban el antiguo editor de un periódico local y otros tres bien conocidos intelectuales, habían sido arrestados por actividades políticas. En agosto de 1965 se citó en la prensa una declaración del jefe de la policía política PIDE (Policía Internacional de Defensa do Estado), según la cual estos arrestos formaban parte de medidas tomadas para eliminar un grupo subversivo creado por el FRELIMO en Mozambique meridional. Se informó que se habían efectuado varios otros arrestos en relación con el caso y que, en consecuencia, se había clausurado el Centro Associativo dos Negros da Província de Moçambique, asociación y centro cultural y educativo para africanos ubicado en Lourenço Marques, e integrado por 15.000 africanos. Se reveló más tarde que la asociación había sido condenada porque se acusaba a algunos miembros de su directorio de actividades políticas subversivas, pero que después de una interrupción se permitiría que el centro reanudase sus actividades educativas.

Condiciones económicas

157. Los gastos de defensa de Mozambique siguen aumentando como consecuencia de las hostilidades iniciadas en 1964. Los créditos consignados en 1965 para las fuerzas armadas ascendieron a 578.730.000 escudos¹⁹, de los cuales 437.700.000 escudos eran para el ejército, 108 millones para la fuerza aérea y 33 millones para las fuerzas navales. La parte principal de los créditos, esto es, 510 millones, debía pagarlos el Territorio, con cargo a: a) ingreso ordinario (195.800.000 escudos); b) ingresos de órganos para-estatales autónomos (205.200.000 escudos); c) participación del Gobierno en los ingresos del ferrocarril de Beira (48 millones); y d) préstamo público (61 millones)²⁰. Los 68.700.000 escudos restantes debían sacarse del fondo de defensa militar de ultramar de Portugal. Se observará que estos gastos militares, que re-

¹⁹ Ordenes Nos. 21, 243 a 245, 26 de abril de 1965.

²⁰ Decreto No. 46.236 de 18 de marzo de 1965.

presentan sólo parte del gasto total de defensa, representan más o menos el 12% del presupuesto del Territorio y aumentan en proporción de más o menos 80 millones de escudos al año. En 1965 (Instrumento Legislativo No. 2.614 de 10 de julio) se introdujo un nuevo impuesto de sello de defensa nacional, que grava todos los ingresos de más de 100 escudos y todos los demás documentos legales. Se calcula que el nuevo impuesto producirá unos 16.500.000 escudos sólo por concepto de licencias de automóviles. Sin embargo, fuera del aumento en los impuestos, la principal fuente de los fondos de defensa la constituyen créditos adicionales procedentes de los ingresos de los "servicios autónomos", principalmente de los ferrocarriles y puertos controlados por el Gobierno, cuyos ingresos se derivan principalmente del importante comercio de tránsito de los vecinos de Mozambique. El hecho de que este principal sector de la economía de Mozambique esté controlado por el Gobierno territorial permite a la financiación pública cierto grado de flexibilidad que no se logra en Angola, donde los aumentos de ingreso deben proceder principalmente de aumentos en los impuestos o contribuciones del sector privado.

158. El aumento de las contribuciones procedentes de los "servicios autónomos" y, en menor proporción, el aumento de ingresos procedentes de impuestos directos e indirectos como consecuencia del crecimiento de la actividad económica, han permitido que los gastos totales del Gobierno aumenten más rápidamente que los gastos de defensa y no han impedido en consecuencia el aumento de los gastos en otros sectores. Así por ejemplo, el cálculo de ingresos y gastos ordinarios correspondientes a 1966, que asciende a 4.143 millones de escudos, acusa un aumento de 293.600.000 escudos con respecto al año precedente, y de casi 400 millones con respecto a 1964. Las principales fuentes son: ingresos procedentes de "servicios autónomos", 1.695.400.000 escudos (lo que representa un aumento de 176.200.000 escudos con respecto a 1965); impuestos indirectos, principalmente derechos aduaneros, 731.300.000 escudos (lo que representa un aumento de 32.600.000 escudos); e impuestos directos, 648 millones (en que el aumento es de sólo 4.900.000 escudos). Podrá observarse que los impuestos directos proporcionan menos de la sexta parte del ingreso ordinario.

159. Entre las diversas partidas para gastos ordinarios en 1966, podrán observarse las consignaciones siguientes: servicio de la deuda pública, 240.500.000 escudos (que constituye un aumento de 34 millones con respecto a 1965); defensa nacional, 549.400.000 escudos (el aumento es de 80.200.000 escudos); puertos, ferrocarriles y medios de transporte, 1.340 millones (el aumento es de 120 millones); agricultura y silvicultura, 33.700.000 escudos (el aumento es de 200.000 escudos); y sanidad y bienestar social, 175.100.000 escudos (el aumento es de 17.800.000 escudos). Entre las asignaciones presupuestarias para educación en 1966 figuran: servicios educativos del Gobierno, 158.200.000 escudos (el aumento es de 14.500.000 escudos); asistencia a las misiones católicas portuguesas, 69.500.000 escudos; y *Estudos Gerais Universitários*, 19 millones. Por lo tanto, no obstante los aumentos, los gastos en educación representan menos del 6% del presupuesto ordinario, los de sanidad y bienestar representan aproximadamente el 4%, y los de agricultura y silvicultura menos del 1%, sin incluir los gastos que se sufragan con fondos separados con respecto a ciertos cultivos reglamentados.

160. El *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* (véase A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 89 y 90), previó en el caso de Mozambique una cifra objetivo de 5.400 millones de escudos en inversiones para el período de tres años, que se financiaría en la forma siguiente: préstamos externos, 1.500 millones de escudos; Gobierno de Portugal, 1.120 millones; fondos territoriales, 750 millones; sector privado, 1.980 millones, e instituciones crediticias, 50 millones. Por sectores principales, dicha cifra objetivo se distribuía en la forma siguiente: medios de transporte y servicios portuarios, 1.771 millones; industrias, 1.436 millones (con inclusión de 1.350 millones para industrias de transformación); agricultura, 760 millones (con inclusión de 500 millones para planes de riego y colonización); educación y sanidad, 500 millones; electricidad, 400 millones; pesquerías, 328 millones; vivienda y turismo, 144 millones.

161. El objetivo anual de contribuciones procedentes del sector público asciende en virtud del *Plano* a unos 624 millones de escudos, de los cuales 250 millones deberán ser aportados por el Territorio, y unos 374 millones por el Gobierno de Portugal. En 1965 los gastos públicos en virtud del *Plano* ascendieron a 611 millones de escudos, cifra que casi alcanza el objetivo fijado. De este total, 423 millones procedían de préstamos de Portugal y 100 millones de una emisión de bonos del Tesoro hecha por el Gobierno territorial al interés del 5%. La emisión de bonos se hizo en virtud de una autorización general anunciada en el mes de julio, por la que se permitía al Gobierno de Mozambique emitir bonos hasta un máximo de 500 millones de escudos. No se dispone todavía de informaciones con respecto a la contribución de Portugal en virtud del *Plano* para 1966, pero se anunció en febrero que se había autorizado al Gobierno territorial a contraer un empréstito de 200 millones de escudos al 2% de interés del Banco Nacional Ultramarino, suma que se utilizará principalmente para financiar el desarrollo de comunicaciones y transporte. Se anunció también que se habían abierto créditos por 23 millones de escudos para planes agrícolas, de riego y colonización que se financiarán en virtud del Plan de fomento.

162. Como puede esperarse, se está utilizando gran parte de los fondos públicos para el mejoramiento de carreteras, ferrocarriles y servicios portuarios del Territorio. La inauguración a fines de 1964 del ferrocarril de Swazilandia, al aumentar el comercio de tránsito y el turismo, que son la fuente principal de divisas de Mozambique, así como el constante crecimiento de su propio comercio exterior, han impuesto una pesada carga sobre los servicios portuarios y de transporte existentes. Todo esto se refleja en el volumen de mercaderías que pasan por los puertos de Mozambique y por el volumen del tráfico sobre las carreteras, que en ambos casos fue superior en más del 15% durante los ocho primeros meses de 1965, que durante el período correspondiente del año 1964. Para hacer frente a esta actividad adicional, en 1965 se gastaron 140 millones de escudos en servicios portuarios adicionales en Beira, y sumas considerables en mejoras similares en Lourenço Marques. En este último puerto se iniciaron los trabajos de construcción de amplias instalaciones de carga y almacenaje que servirán para las exportaciones de azúcar de Rhodesia y eventualmente para las exportaciones de azúcar que se producirá en la zona de Lourenço Marques. El costo del proyecto que prevé

una capacidad de almacenaje para 80.000 toneladas de azúcar, será de 66 millones de escudos. Se terminaron también los trabajos de construcción de un nuevo muelle de carga de minerales que servirá para recibir el mineral de hierro de Swazilandia, así como la construcción de un nuevo terminal de ferrocarril en Beira (por un costo de 50 millones de escudos), y se firmaron contratos (por un total de 64.700.000 escudos) para la adquisición de nuevo material rodante para el ferrocarril de Mozambique donde las actuales locomotoras a leña se reemplazarán también por motores Diesel a un costo de 125 millones de escudos. Una empresa importante que se financia en virtud del Plan de fomento consiste en un programa rápido de desarrollo de carreteras, que prevé de un modo especial la construcción de una carretera importante de enlace entre Lourenço Marques y Beira, para una parte de la cual se anunciaron en 1965 contratos por un total de 200 millones de escudos; dicha empresa prevé también la extensión y mejora de carreteras en el norte del país.

163. Según los informes Mozambique está entrando en un período de importante expansión en varios sectores de su economía interna. En el campo de la producción azucarera se han formado o se están formando tres nuevas compañías que prevén para la región inversiones de capital de 500 millones de escudos cada una. Dentro de unos pocos años, esta producción conjunta deberá aumentar en más o menos el 50% la producción azucarera del Territorio (que alcanzó a un total de 181.775 toneladas en el período 1963/1964). Dos de dichas compañías son portuguesas y la tercera, ubicada en el valle inferior del Zambezi, es una filial de la Anglo-American Corporation of South Africa (que tiene también intereses en el tratamiento del anacardo, en la pesca y en la prospección de diamantes en Pafuri). Además, la empresa Sena Sugar Estates, Ltd., que es la más grande de las empresas productoras existentes, inició en enero de 1965 un programa de inversión de capital por una cifra aproximada de 360 millones de escudos, que aumentará su producción en más o menos el 25%. (Los detalles relativos a estas actividades figurarán en un estudio separado, que está en preparación, acerca de la función que desempeña la agricultura en Angola y Mozambique.)

164. El hecho más notable ocurrido en estos últimos años ha sido sin embargo el crecimiento de la producción y tratamiento del anacardo. Por primera vez las exportaciones de anacardo ocuparon el primer lugar entre las exportaciones del Territorio en 1964, produciendo un ingreso de exportación de 608 millones de escudos, en comparación con 565 millones correspondientes al algodón crudo, que era en otro tiempo la principal exportación de Mozambique. Esto representa un 38,5% de aumento en el valor del anacardo exportado con respecto a 1963. Debido a que el valor de exportación del anacardo esté a más o menos el doble que el de la nuez no procesada, las últimas inversiones se han concentrado en el establecimiento de fábricas de elaboración. En 1965 se iniciaron los trabajos de construcción de una importante fábrica mondadora en el distrito de Gaza con fondos (20 millones de escudos) proporcionados conjuntamente por empresas sudafricanas (principalmente la Anglo-American Corporation), italianas y portuguesas locales. La fábrica está relacionada con un proyecto en gran escala encaminado al desarrollo del cultivo del anacardo en una extensión de 30.000 hectáreas que se asignarán a colonos europeos y africanos. En el mismo año 1965, una filial de

la Companhia União Fabril de Portugal consiguió autorización para establecer tres fábricas elaboradas en Nacala, Nampula y Porto Amélia, que tendrán en conjunto una capacidad elaboradora de 70.000 toneladas de anacardo crudo.

165. Si bien las industrias manufactureras y de transformación desempeñan sólo un papel secundario dentro de una economía predominantemente agrícola, dichos sectores dan también señales de creciente actividad. Fue sumamente notable el aumento en un 29% en la construcción de edificios, registrado desde 1963 a 1964; los aumentos del 26,7% y 23,3% en los valores, respectivamente, de maquinaria no eléctrica y eléctrica importadas, y un señalado aumento en el número de nuevas empresas industriales registradas (de 431 a 647) en los dos años. Buena parte de las nuevas inversiones tienen sin embargo por objeto los bienes de consumo, principalmente ropa y textiles, fábricas de cerveza, molinos harineros y otros productos alimenticios, muebles y equipo de metal liviano y eléctrico. Entre las más importantes inversiones nuevas anunciadas en 1965 figuraba una fábrica de fertilizantes que deberá construirse cerca de Nova Sofala a un costo de 200 millones de escudos, y cuyo trabajo contractual estará a cargo de una firma francesa, la Sodeix. En representación de intereses financieros locales se ha contratado también a industriales franceses para la creación de una fábrica de bicicletas que producirá al año 35.000 bicicletas y 3.000 bicicletas con motor. Entre las demás inversiones nuevas figuran una fábrica de cerveza (70 millones de escudos), una fábrica de productos lácteos y de tratamiento de la carne (20 millones de escudos), una fábrica de armadura de camas (30 millones de escudos) y un molino harinero (25 millones de escudos). Se están celebrando negociaciones para la construcción de fábricas destinadas a producir neumáticos de automóviles y productos de aluminio liviano.

166. En diciembre de 1966 se anunció que en el sector más importante de artículos eléctricos se habían firmado contratos para la construcción de una planta de electricidad termal destinada a abastecer a la ciudad de Nacala, cuyos trabajos se completarán a fines de 1966 a un costo de 150 millones de escudos. Continúan los trabajos de investigación sobre un propuesto proyecto hidroeléctrico sobre el río Elefantes, que es uno de los principales tributarios del Limpopo, del cual se sacaría energía para Lourenço Marques. La Sociedade Hidroeléctrica do Revuê está también aumentando su capacidad productiva en Vila Pery con la construcción de una nueva presa ubicada en Chicambe y que costará 80 millones de escudos. En diciembre se firmó entre Portugal y Rhodesia del Sur un nuevo acuerdo que extiende hasta julio de 1971 los acuerdos existentes en virtud de los cuales parte de la energía producida por Revuê se traspasará a Umtali.

167. En 1965 empezó también a funcionar el oleoducto construido para transportar petróleo crudo del puerto de Beira a la refinería de Rhodesia en Feruka (Umtali). Como se señaló en el informe de 1965 del Comité Especial (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 93), el oleoducto pertenece a una compañía mixta en que los intereses británicos poseen el 62% de las acciones, pero en la cual, en virtud de la ley de Portugal, la mayoría de los directores son portugueses. A raíz de la "declaración unilateral de independencia" en Rhodesia del Sur, cesó el transporte de petróleo a través del oleoducto debido al embargo de embarques de petróleo destinados a Rhodesia del Sur impuesto por el Reino Unido

sobre sus nacionales así como por otros gobiernos que obraron en cumplimiento de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad. Si bien los informes señalan que no se ha entregado petróleo en el terminal del oleoducto desde diciembre de 1965, en marzo de 1966 los informes de la prensa señalaron la construcción de nuevos estanques de almacenamiento de petróleo en el puerto de Beira. Se dice que Portugal ha informado al Gobierno del Reino Unido que dichos tanques los construye una compañía portuguesa como medida de precaución para no tener que depender de las instalaciones existentes que son propiedad de compañías extranjeras. Ha habido también informes del paso de productos petroleros en vagones-tanques de ferrocarril desde Sudáfrica a Rhodesia del Sur a través de Lourenço Marques. (Véanse más detalles sobre esta materia en el capítulo III, párrs. 270 a 277.)

168. Como se ha señalado antes, Mozambique sufre un déficit crónico tanto en su balanza comercial como en su balanza de pagos con el exterior. No obstante los considerables aumentos registrados en el valor de exportación del anacardo y productos de la madera, que en 1964 aumentaron en 38,5% y 48,9%, respectivamente, el valor de las exportaciones aumentó solamente en un 5,1% de 2.900 millones de escudos en 1963 a 3.000 millones de escudos en 1964, mientras que las importaciones aumentaron en un 10,2%, de 4.100 millones de escudos a 4.500 millones, dejando un déficit neto de 416 millones de escudos. Este creciente déficit comercial se debió en parte a una brusca disminución en las exportaciones de azúcar como consecuencia de condiciones atmosféricas desfavorables y de la renovación del equipo de las plantaciones de Sena, así como al hecho de que desde 1961 se ha mantenido el bajo nivel de las exportaciones de algodón. La causa principal fue, sin embargo, un notable aumento en la importación de equipo industrial y de bienes de consumo. Las estadísticas preliminares correspondientes a los primeros ocho meses de 1965 revelan características similares en el relativo aumento de las importaciones y exportaciones. Al formular observaciones sobre esta situación, el autor de un artículo aparecido en un periódico de Mozambique señalaba que una de las causas por las cuales ha aumentado con más lentitud el valor de las exportaciones era el hecho de que algunos de los principales productores agrícolas no aprovechaban de los precios más favorables de exportación que podrían conseguir si elaborasen más sus productos en la localidad. Mencionó en particular que no existía en el Territorio ningún tratamiento industrial del sisal²¹, coco y subproductos del azúcar.

169. El creciente déficit de la balanza comercial registrado en 1964 se compensó en parte con un mayor

²¹ Se ha informado por la prensa que se está estudiando la construcción de una fábrica de cuerdas de sisal en Nacala.

ingreso procedente del comercio de tránsito de Territorios vecinos. Como consecuencia de ello, el déficit de la balanza de pagos disminuyó de 386 millones de escudos en 1963 a 223 millones en 1964. Los datos disponibles con respecto a los cuatro primeros meses de 1965 señalan que esta tendencia se mantiene.

170. Por el contrario, las exportaciones de Mozambique en 1966 reflejarán probablemente los efectos de un fuerte ciclón acompañado de inundaciones que azotaron el Territorio a comienzos de enero. Los informes de la prensa señalan que los perjuicios fueron extensos y considerables, principalmente para las plantaciones de anacardo en el distrito de Gaza y los cultivos de banana y trigo en los distritos de Inhambane y Lourenço Marques.

Situación de la enseñanza

171. El análisis de la situación de la enseñanza en Mozambique ofrece ciertas dificultades debido al carácter limitado de la información disponible y a la nueva definición del término "escuelas primarias" según el Decreto-ley No. 45.908 de septiembre de 1964 (véanse párrs. 81 a 86 *supra*) en virtud de la cual dicha expresión se reserva actualmente a las escuelas que cuentan como mínimo con la clase preprimaria y las tres primeras clases elementales (*postos escolares*). En Mozambique son muchas las escuelas rurales que tienen menos de este mínimo y por tal razón desde 1964 no se las incluye en las estadísticas de las matrículas primarias.

172. Tomando como base la antigua definición, se puede observar que en los últimos cinco años hubo un aumento relativamente considerable en la enseñanza primaria. En 1963, por ejemplo, había 3.600 establecimientos de enseñanza primaria de todas clases oficialmente reconocidos, que contaban con 5.600 maestros y una matrícula escolar de 400.000 alumnos. Comparados estos datos con los de 1955, representan un aumento de 1.400 establecimientos, 3.200 maestros y 130.000 alumnos²².

173. En las estadísticas publicadas por el Gobierno de Mozambique²³, compiladas probablemente a base de la nueva definición de escuelas primarias que figura en el Decreto-ley No. 45.908, las cifras correspondientes a la matrícula en las escuelas primarias es de 44.725 alumnos en el período escolar 1963-1964. El cuadro siguiente expone la composición de dicha matrícula por grupos étnicos principales en comparación con las cifras demográficas de los grupos étnicos respectivos en 1960:

²² *Boletim Geral do Ultramar*, enero-febrero de 1965.

²³ Mozambique, Serviços de Estatística Geral, Estatística do Ensino.

Grupo étnico	Matrículas primarias	Porcentaje con respecto a la cifra demográfica del grupo
Africanos	23.093	0,35
Chinos (<i>amarelos</i>)	294	14,0
Europeos	10.358	10,6
Indos	2.412	13,9
Mestizos	7.020	22,3
No especificados	1.548	—

174. Según la misma fuente, el número de alumnos matriculados en el nivel secundario en el período 1963-1964 fue de 18.415. El cuadro siguiente expone su composición por grupo étnico en comparación con las cifras demográficas correspondientes a los mismos grupos en 1960:

Grupo étnico	Matrículas secundarias	Porcentaje con respecto a la cifra demográfica del grupo
Africanos	2.781	0,04
Chinos (<i>amarelos</i>)	794	37,8
Europeos	10.914	11,2
Indos	1.381	8,0
Mestizos	2.291	7,2
No especificados	254	—

175. Se puede advertir también que en términos relativos la tasa de aumento ha sido mayor en el grado secundario que en el primario. Así por ejemplo las matrículas de las escuelas elementales (*liceal*) aumentaron de 1.106 en 1956-1957 a 4.124 en 1963-1964, mientras que la matrícula en las escuelas profesionales técnicas (que comprenden las escuelas comerciales y las instituciones de capacitación para empleo público) aumentaron de 2.285 en 1955-1956 a 8.639 en el período 1963-1964.

176. Son muy pocas las informaciones disponibles con respecto al desarrollo experimentado por la enseñanza primaria y secundaria en el año 1965, si bien se puede advertir que en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*, se asignaron 220 millones de escudos para la construcción de nuevas escuelas y para capacitación de maestros. A fines de 1964 y en enero de 1965 se informó por la prensa que se había autorizado la construcción de cinco nuevas escuelas primarias y una escuela técnica elemental por un costo total de casi 8 millones de escudos. Meses más tarde en 1965 se anunció que en Vila Cabral y Nampula se estaban construyendo dos nuevas escuelas secundarias (*liceus*).

177. Como consecuencia del Decreto No. 46.464 de 31 de julio de 1965 (véanse párrs. 81 a 86 *supra*) parece estarse atribuyendo especial importancia a la expansión de la capacitación agrícola. A principios de 1965 el Territorio poseía una escuela agrícola de nivel secundario o técnico (*escola prática de agricultura*) en el valle de Limpopo, así como tres instituciones de capacitación dirigidas por el Departamento de Agricultura; se estaban estableciendo además tres escuelas agrícolas elementales y se planificaba el establecimiento de un centro de capacitación profesional postsecundario para personal agrícola (*regentes*)²⁴. Se informó anteriormente por la prensa que como primera disposición en cumplimiento del Decreto No. 46.464, se tomaban medidas para introducir cursos de agricultura y de mecánica agrícola en las escuelas (secundarias) industriales.

178. En 1965 se hacían progresos en el desarrollo de los estudios universitarios generales (*Estudos Gerais Universitários*) en Lourenço Marques, que ha previsto una matrícula de más de 3.000 estudiantes para 1970-1975 y un objetivo final de 8.000 alumnos para 1980. Inaugurados en noviembre de 1963 con una matrícula

de 282 estudiantes, cuenta actualmente, según informes de la prensa, con una población estudiantil de casi 600 alumnos. En el último año académico, 1964-1965, la matrícula alcanzó un total de 329 alumnos (75 de los cuales recibían formación para maestros escolares secundarios, 167 estudiaban ingeniería, 53 medicina, 19 ciencias veterinarias y 15 asistían al instituto de agronomía y silvicultura, siendo todos estos los únicos departamentos que estaban entonces funcionando). Esta institución docente ha estado instalada hasta ahora en locales provisionales y su ritmo de expansión depende únicamente de la disponibilidad de fondos para construcción y equipos. Hasta 1965 los gastos de capital ascendían a 132 millones de escudos invertidos, entre otras cosas, en la construcción de laboratorios para agronomía, biología y química. En 1965 los cursos de capacitación normal se ampliaron con la creación de cursos de formación para maestros auxiliares del grupo octavo (agricultura) y del grupo undécimo (silvicultura) de las escuelas profesionales técnicas.

179. Para ingresar a los *Estudos Gerais Universitários* se requiere haber seguido un curso de dos años en un nivel superior al que existe actualmente en las escuelas secundarias, y los estudiantes que no consiguen beca (que son alrededor de un centenar) pagan honorarios cuyo monto normal es de más o menos de 1.500 escudos al año. Se podrá observar que de un total de 291 estudiantes que iniciaron estudios superiores (*Estudos Gerais Universitários* e Instituto de Asistentes Sociales) en 1963-1964, se informó que 269 eran europeos, 15 indos, 5 africanos y 2 *mestiços*.

4. Guinea bajo administración portuguesa

Evolución constitucional y política

a) Elección del Jefe de Estado

180. Para la elección del Jefe de Estado, celebrada en julio de 1965, Guinea bajo administración portuguesa estuvo representada en el Colegio Electoral por los cinco miembros siguientes: el diputado a la Asamblea Nacional, el miembro representante del Territorio en la Cámara Corporativa, un representante de los concejos municipales y dos miembros del Consejo Legislativo del Territorio.

b) Elecciones a la Asamblea Nacional

181. El Dr. Pinto Bull, Secretario General y diputado en ejercicio de la Asamblea Nacional, fue nueva-

²⁴ *Boletim Geral do Ultramar*, enero-febrero de 1965.

mente el candidato de la Unión Nacional. Salió reelegido. La prensa portuguesa informó que el 85% de los votantes inscritos tomaron parte en la elección.

Situación militar en el Territorio

182. En 1965 continuó la lucha que comenzó por primera vez en 1963 (A/5800/Rev.1, cap. V, párrs. 180 y 181), y en realidad la mayor parte de los noticieros se refieren al Territorio como a un Territorio en estado de guerra. Lo mismo que en Angola y Mozambique, existen informes contradictorios con respecto a la verdadera situación militar, pero todos los informes parecen indicar que no terminará pronto la guerra de guerrillas.

183. Casi todos los boletines militares portugueses publicados en 1966 se refieren a las luchas que se sostienen en las fronteras septentrional, oriental y meridional del Territorio, describiendo operaciones del ejército, la armada y la fuerza aérea. Al norte del río Cacheu, las actividades de las guerrillas se desarrollan casi continuamente alrededor de Susana, S. Domingos, Bigene y Farim. Se informa también de actividades bélicas alrededor de Bissorã y Mansabá y otras comunidades que se encuentran a unos 30 a 50 kilómetros al interior de la frontera; pero Bissorã se encuentra no mucho más de 100 kilómetros en la línea recta al noreste de Bissau, capital del Territorio. De un modo similar, a lo largo de las fronteras oriental y meridional se informa casi cada semana acerca de actividades llevadas a cabo por las fuerzas del gobierno en muchas localidades contra los "bandidos". En el sur, sin embargo, actúan también las guerrillas alrededor de Catió y Buba, que no se encuentran a lo largo de la frontera. Por la frecuencia con que se habla de canoas capturadas, pareciera que los ríos y otras vías navegables fuesen también importantes regiones de batalla.

184. En 1965 el PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) afirmó que una proporción considerable de la población del Territorio, calculada en 800.000 personas, está actualmente incluida dentro de las "zonas liberadas", donde se está levantando aldeas dotadas de amplia autonomía en el sentido democrático y se están organizando servicios económicos y sociales. En noviembre de 1965 un portavoz del Ministerio de Defensa del Portugal negó que las guerrillas controlasen las regiones de Bué en el noreste y de S. Domingos en el noroeste.

185. En un reciente artículo de prensa, un miembro del Parlamento británico declaró que son infundados los informes que hablan de "dominio rebelde en las dos terceras partes del Territorio", y que la isla Bissau y el archipiélago de Bijagós han estado exentos de lucha. "En otras partes", agrega, "es difícil detener la profunda penetración por tierra o agua". Después de describir la obra de carácter médico y educativo llevada a cabo por las tropas portuguesas en las aldeas, el artículo sigue diciendo: "El estado de guerra se ha intensificado por ambas partes" e informa que existe un "ejército del pueblo" más numeroso que los anteriores grupos de guerrilleros, y que cuenta con bases importantes en la Isla Como y en la región central Oió. Se informa que los guerrilleros están bien armados. (Los portugueses han informado con frecuencia que les han capturado armas.) Los portugueses, por otra parte, han "distribuido miles de pistolas mauser y granadas a los voluntarios de las aldeas, y ametralladoras ligeras a sus

dirigentes. Las aldeas están cercadas de alambres y fortificadas ...".

Condiciones económicas

186. En 1965 los gastos de las fuerzas armadas en Guinea bajo administración portuguesa se distribuían así: 31.300.000 escudos para el ejército, de los cuales 4.600.000 provenían del ingreso del Territorio y 24.500.000 de pagos complementarios de Portugal en virtud del presupuesto extraordinario; 2.100.000 escudos se asignaron para el fondo de defensa de ultramar; 16 millones para la armada y 20.600.000 escudos para la fuerza aérea. La participación total del Territorio en estos gastos fue de 30.600.000 escudos (Ordenes 21.216, 21.215 y 21.218, abril de 1965). Esta suma equivale a casi el 20% del cálculo de ingresos del Territorio para 1965 que ascendió a 151.750.079 escudos (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 105) y, como el cálculo de gastos ascendió a un total de 151.750.791 escudos, no se previó ningún excedente.

187. Desde 1957 el presupuesto del Territorio se ha mantenido alrededor de esta cifra (150.100.000 escudos en 1957; 150.900.000 escudos en 1958; 151.100.000 escudos en 1959; 141 millones de escudos en 1960). Como lo señaló en 1965 el Gobernador y Comandante en Jefe del Territorio, General Arnaldo Schulz, debido a su reducido presupuesto el Territorio no tiene cómo costear los gastos de personal y de los servicios administrativos necesarios, incluso los de educación. Declaró que lo que el Territorio necesitaba para consolidar una victoria militar era más personal, inversiones privadas, desarrollo industrial y más educación. Declaró que esperaba con confianza mejores días para lo por venir cuando Portugal prestase mayor apoyo al Territorio.

188. Como se expuso en el informe de 1965 (*ibid.*, párr. 108), se asignan al Territorio créditos por 180 millones de escudos en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*. Debido a la precaria situación financiera del Territorio²⁵ y a la incertidumbre que existe acerca de inversiones privadas precisas, el total de la asignación se financiará con cargo a fondos públicos de Portugal (*Proyecto de Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*).

189. Existen muy pocas informaciones sobre la medida en que se está cumpliendo con el *Plano Intercalar de Fomento*. En el curso del año se asignaron al Territorio dos sumas por un total de 19 millones de escudos con cargo al tesoro de Portugal (en virtud del Decreto No. 43.519 de 28 de febrero de 1961. Este total debe incluirse en el presupuesto extraordinario para 1965 del Ministerio de Ultramar, pero es en realidad un préstamo al 4% de interés y pagadero en 20 años). Más de la mitad de los 19 millones de escudos está destinada a desarrollo de medios de transporte y comunicaciones (9.100.000 escudos) así como de puertos (2.500.000 escudos). El resto se destina a desarrollo

²⁵ En el estudio realizado para preparar el *Plano Intercalar de Fomento*, se previó que el Territorio tendría un saldo de excedentes por un total de 19 millones de escudos en el período 1965-1967, y un excedente de 4 millones de escudos a fines de 1964. Sin embargo, de estos 23 millones, 12 millones deberían asignarse a otros gastos extraordinarios y sólo quedarían 11 millones de escudos disponibles para financiar el plan. Como se dijo más arriba, el presupuesto de 1965 no tuvo excedentes. No se cuenta todavía con detalles acerca del presupuesto de 1966.

de la pesca, 1.800.000 escudos; industrias, 500.000 escudos; educación, 2.200.000 escudos; abastecimiento de agua, 2 millones; y turismo, 1 millón de escudos.

190. En diciembre de 1965 se autorizó al Ministerio de Defensa (Decreto 46.683) (véase párr. 57 *supra*) a que concediese anualmente al Territorio préstamos no superiores a las sumas determinadas por el Consejo de Ministros para Asuntos Económicos para el cumplimiento del *Plano Intercalar de Fomento*. Según el informe de enero de 1966 los préstamos concedidos en 1965 por el Gobierno Central al Territorio para el *Plano de Fomento* ascendieron a 35 millones de escudos. Esta cifra representa un poco más de la mitad del promedio de inversiones anuales previsto en el *Plano Intercalar de Fomento*.

191. Entre Portugal y la Esso Exploration Inc. de Nueva York se ha firmado un contrato por el cual se traspasa a esta empresa la concesión para prospección petrolera que tenía anteriormente la ahora disuelta Esso Exploration Guinea Inc. Se informa que la antigua compañía gastó casi 250 millones de escudos (8.500.000 dólares) en prospección, pero que no ubicó depósito alguno comercialmente explotable.

192. El nuevo contrato concede a la compañía de Nueva York una concesión de más o menos 50.000 kilómetros cuadrados, en que están comprendidas toda la zona terrestre del Territorio (33.700 kilómetros cuadrados) así como las playas marinas, lacustres y fluviales. El período inicial del contrato es de cinco años. La compañía se compromete a invertir en prospección 24 millones de escudos el primer año, 59 millones el segundo año, 78 millones el tercer año y 68 millones en cada uno de los últimos dos años. Dentro del plazo de tres meses después de la firma del contrato la compañía pagará al Gobierno de Guinea bajo administración portuguesa la suma de 40 millones de dólares, que constituirá un pago anticipado del primer año de arriendo, y un 25% de pago anticipado del arriendo por los cuatro años ulteriores. Si se determina más tarde que la extensión es superior, el Territorio tendrá derecho a recibir un pago adicional. Empero, si la extensión es más reducida no se hará devolución alguna.

193. Entre otros hechos ocurridos durante el año se deben señalar el establecimiento de una Comisión técnica para planificación y coordinación económicas y la creación de un nuevo fondo crediticio agrícola y ganadero destinado a proporcionar préstamos a largo, medio y corto plazo a la agricultura, ganadería e industria o propiedades. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1 (cap. V, párrs. 35 y 109), en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*, más o menos el 15% (33.200.000 escudos) se destina a proyectos especiales de producción de arroz, mandioca, palmas aceiteras, bananeros y anacardos.

194. No se cuenta con estadísticas comerciales recientes ni con informaciones sobre la producción agrícola para 1965. En diciembre de 1964 los principales productos exportados a Portugal fueron 280 toneladas de coco, avaluadas en 896.000 escudos; 300.000 kilos de cueros y pieles, avaluados en 222.893 escudos; 32.028 kilos de maní descascarado, avaluados en 140.603 escudos, y 6.866 kilos de cera de abejas, avaluados en 122.353 escudos. Las principales importaciones efectuadas en el curso de dicho mes fueron 1.200.000 litros de gasolina, 226.994 kilos de azúcar, 229.900 kilos de patatas y 214.102 litros de vino. En 1965 se autorizó al Territorio, que ha tenido que importar arroz desde

1960, a que importase hasta 10.000 toneladas de dicho producto de cualquier fuente y libre de derechos de importación. Se revisaron también los precios del arroz y en cuatro *concelhos* se permitió la compra de arroz procesado a mano.

Educación

195. Las últimas estadísticas escolares disponibles sobre el Territorio corresponden al año 1963, en que había 163 escuelas primarias fiscales, dotadas de 212 maestros y con una matrícula de 12.000 alumnos. (Al levantarse el censo de 1960 la población total del Territorio era de 530.380 habitantes, y el 40% de dicha cifra estaba constituido por musulmanes.) Había además una escuela secundaria académica con 20 maestros y 272 estudiantes; una escuela comercial e industrial (profesional) con 26 maestros y 308 estudiantes; una escuela profesional elemental con cuatro maestros y 19 estudiantes y otras 79 escuelas (musulmanas) con 81 maestros y 718 alumnos. Había 105 personas matriculadas en los programas de capacitación del Gobierno: 65 de ellas estudiaban agrimensura y topografía (*agrimensura e topografia*) y 40 seguían cursos de capacitación técnica para trabajos portuarios.

5. Cabo Verde

Evolución constitucional y política

196. En la elección del Jefe de Estado, celebrada en julio de 1965, Cabo Verde estuvo representado en el Colegio Electoral por los 13 miembros siguientes: dos diputados a la Asamblea Nacional, un miembro de la Cámara Corporativa, seis representantes de los concejos municipales y cuatro del Consejo Legislativo del Territorio. Cabo Verde tiene dos representantes en la Asamblea Nacional y había sólo dos candidatos de la Unión Nacional. La prensa portuguesa informó que el 86,5% de los votantes inscritos tomó parte en las elecciones.

Situación económica y financiera

197. En 1965 los gastos de las fuerzas armadas de Cabo Verde ascendieron a 23.800.000 escudos. Esta cifra incluía una asignación de 10.400.000 escudos para el ejército, de la cual 1 millón procedía del presupuesto ordinario del Territorio, 7.600.000 de Portugal y 1.800.000 del fondo de defensa militar de ultramar; los gastos de la armada ascendieron a 2.100.000 escudos y los de la fuerza aérea a 1.300.000 escudos. La contribución del Territorio a los gastos totales de defensa fue de 1.700.000 escudos, de los cuales 400.000 eran para la armada y 300.000 para la fuerza aérea (Ordenes 21.157, 21.158, 21.159, 10 de marzo de 1965).

198. El presupuesto de Cabo Verde para 1965 se equilibró en la cifra de 84.673.000 escudos, en comparación con 70.900.000 escudos en 1963, 65 millones en 1962 y 61.200.000 en 1961. Si bien han aumentado los gastos ordinarios, se ha producido una notoria disminución en los gastos extraordinarios, para los cuales el presupuesto asignó solamente 2.690.000 escudos en 1965. Conviene comparar esta cifra con las asignaciones de 38.700.000 escudos en 1963; 67.300.000 en 1962 y 71.600.000 en 1961.

199. En el cálculo de gastos ordinarios para 1965 figuraban las asignaciones siguientes: 2.900.000 escudos.

para el servicio de la deuda pública del Territorio (la misma suma que los años anteriores); 27 millones de escudos para servicios administrativos (con inclusión de más o menos 10 millones para educación, en oposición con los 9 millones asignados en 1963); 3.500.000 escudos para defensa nacional; 9.200.000 escudos para servicios marítimos y 13.400.000 escudos para diversos gastos generales.

200. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 35 y 113), en Cabo Verde se invertirán 500 millones de escudos en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*. El plan preveía en principio que más o menos la mitad del total de las inversiones procedería de fuentes externas, y se destinaría principalmente al desarrollo de pesquerías. Parece que por lo que se refiere al año 1965 por lo menos, la única fuente de inversiones fue la procedente de los fondos proporcionados por Portugal.

201. En febrero de 1965 (Orden 7.224, 27 de febrero), Portugal puso a disposición del Territorio un "subsídio reembolsable" (*subsídio reembolsável da Metrópole*) de 73 millones de escudos para diversos proyectos previstos en el *Plano Intercalar de Fomento*. Del total de dicha cifra, más de la mitad (43 millones de escudos) se destinaba a mejoramientos en el sistema de transportes y comunicaciones. El resto se distribuía principalmente en la forma siguiente: agricultura, 8.500.000 escudos; industria, 5.500.000 escudos; salud y bienestar, 6 millones; educación, 2.500.000; vivienda y mejoras locales, 3.300.000 y energía, 2 millones de escudos. Se asignó 1.500.000 escudos a pesquerías, actividad en la que todavía se informa está interesado Krupp de la República Federal de Alemania, pero para la cual no ha comprometido aún inversión alguna.

202. En julio de 1965 Cabo Verde recibió también de Portugal un préstamo por 3.075.000 escudos en virtud de disposiciones que regulan el presupuesto del Territorio (Decreto No. 40.712 de 1º de agosto de 1956). Dicho préstamo se distribuyó en la forma siguiente: para carreteras, 2.008.000 escudos; puertos, 20.000 escudos; aeropuerto, 764.000 escudos; educación, 224.000 escudos; sanidad, 54.000 escudos.

203. A fines de año se autorizó al Ministerio de Hacienda de Portugal a que concediese al Territorio los préstamos que necesita para el cumplimiento del *Plano Intercalar de Fomento*, estipulándose que tales préstamos deben ser sin interés alguno (véase párr. 57 *supra*). En enero de 1966 se informó que el total de préstamos concedidos a Cabo Verde en 1965 ascendió a 101 millones de escudos.

204. La isla de Cabo Verde ha sido siempre afectada por la sequía y en el pasado se padeció el hambre en gran escala. En virtud del *Plano Intercalar de Fomento* las inversiones en el sector agrícola se concentran en riego, reforestación y reorganización de propiedades agrícolas con el fin de aprovechar en la mejor forma posible los recursos disponibles de agua. El Grupo Especial que se había organizado para el mejoramiento de la agricultura fue reemplazado en 1965 por una brigada técnica de fomento agrario temporal dotada de más personal. Este nuevo grupo estará encargado de fomentar las cooperativas agrícolas, elaborar planes de aprovechamiento de la tierra, asegurar la máxima utilización de las instalaciones de riego existentes y nuevas y estimular la reforestación y conservación de suelos. El Grupo está compuesto por tres funcionarios agrícolas, un médico veterinario, 13 fun-

cionarios técnicos y demás personal administrativo. En agosto (Orden 21.473, 17 de agosto) se asignó un crédito especial de 690.000 escudos para la instalación de una propiedad agrícola colectiva de amplia extensión y dotada de riego.

205. Los cultivos tradicionales del Territorio son el maíz, frijoles y caña de azúcar. Los únicos cultivos de exportación de cierta importancia son el *purgueira* (nuez purgante), el café y las bananas. Con el fin de aumentar las exportaciones del Territorio en 1959 (Decreto No. 42.390 de 15 de julio) se hizo obligatorio el cultivo del café en ciertas zonas regadas de las islas Santiago, Santo Antão y Fogo. Por entonces esta medida dio margen a una protesta dirigida al Ministerio de Ultramar en que se decía que perjudicaba la producción de alimentos del Territorio; pero la protesta fue rechazada por el Ministerio de Ultramar que la consideró sin fundamento puesto que en el caso de Santiago y de Santo Antão las medidas obligatorias se aplicaban sólo a una cuarta parte de la propiedad agrícola regada en las zonas asignadas para el cultivo del café; en el caso de Fogo, donde la lluvia es más abundante, si bien en todas las zonas designadas había que plantar café, los agricultores podían sin embargo mantener cultivos de productos alimenticios en el espacio que quedaba entre los cafetos.

206. Según las informaciones disponibles, en 1965 el Territorio importó arroz y se le autorizó para que importara de Angola 12.000 toneladas de maíz exentas de derechos de importación (Orden 7.209, 13 de febrero).

207. Desde 1962 el Gobierno de Portugal ha auspiciado el asentamiento en Angola de un número considerable de personas procedentes de Cabo Verde, en parte como medio de resolver el problema de la superpoblación en las islas. Se calcula que la actual población de Cabo Verde es de más o menos 215.000 habitantes, cifra que se espera aumentará a unos 268.500 para 1970. Según informaciones oficiales, esta última cifra excedería en 100.000 personas a las que el Territorio puede sostener. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 178 a 180) los colonos procedentes de Cabo Verde serán elegidos entre los trabajadores rurales con aptitud especial para la agricultura y las condiciones para su establecimiento son distintas de las que se aplican a los agricultores que emigran desde Portugal. Los jefes de familia de Cabo Verde migran primero; no pueden tener más de 45 años de edad y están organizados en grupos colocados bajo la autoridad de un *cabo chefe*. El resto de la familia puede emigrar a Angola solamente después que el jefe de familia ha podido asegurar su instalación. Algunos de los grupos migratorios son asentados como granjeros, pero otros parecen ser aceptados como trabajadores rurales, de los cuales tiene necesidad el Territorio a juicio de las autoridades de Angola.

208. No existen estadísticas disponibles para 1965. Durante los tres primeros trimestres de 1964 las principales exportaciones, que consistieron principalmente en tierra puzolana (aglomeración de sílice que contiene tierra que se utiliza para la fabricación de cemento y concreto), sal, atún fresco, envasado y en escabeche, ascendieron a 1.700.000 escudos. Durante el mismo período las importaciones consistieron principalmente en leche fresca, condensada y evaporada por valor de 1.100.000 escudos, mantequilla por valor de 1.400.000 escudos y patatas por valor de 1.200.000 escudos.

Educación

209. Las últimas estadísticas educacionales disponibles sobre el Territorio corresponden a 1963 (*Boletim Geral do Ultramar*, mayo de 1965). En dicho año hubo 307 escuelas primarias (183 fiscales y 124 particulares) dotadas de 378 maestros y con una matrícula de 18.593 alumnos; cinco escuelas secundarias (dos liceus y tres escuelas profesionales técnicas) con 75 maestros y 1.491 estudiantes, de los cuales 1.076 estaban en los dos liceus. Había además dos escuelas profesionales elementales con siete maestros y 83 alumnos. Seguían también cursos de capacitación 185 funcionarios públicos.

6. Santo Tomé y Príncipe

Evolución constitucional y política

210. Para la elección del Jefe de Estado celebrada en julio de 1965, el Territorio estuvo representado en el Colegio Electoral por los cinco miembros siguientes: el diputado a la Asamblea Nacional, el miembro de la Cámara Corporativa, un representante de los concejos municipales y dos miembros del Consejo Legislativo del Territorio.

211. Para las elecciones a la Asamblea Nacional, que se realizaron mediante sufragio directo (véase párr. 32), el número de votantes inscritos fue de 5.024, o sea, el 10% más, aproximadamente, de la población total. Del total de inscritos votaron 3.804 personas, lo cual representa el 76,6% del electorado.

Situación económica y financiera

212. En 1965 los gastos totales de las fuerzas armadas de Santo Tomé y Príncipe ascendieron a 8.800.000 escudos. En esta cifra estaba incluida una asignación de 5.900.000 escudos para el ejército, de los cuales 2 millones procedían del propio presupuesto del Territorio, 2.700.000 escudos de Portugal y 1.200.000 escudos del fondo de defensa militar de ultramar; los gastos de la armada y fuerza aérea ascendieron a 2.300.000 escudos y a 627.100 escudos, respectivamente. La contribución del Territorio a estos gastos de defensa fue de 3 millones de escudos.

213. El nuevo aeropuerto de Santo Tomé, terminado en 1964, pueden utilizarlo los aviones a retroimpulso en caso de emergencia, y es mantenido y explotado conjuntamente con fondos de Angola, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe (Decreto No. 45.745 de 1º de junio). En 1964 la cuota de contribución a los gastos fue de 1 millón de escudos para cada uno de los Territorios más grandes y de 300.000 escudos para las islas. Para 1966 los gastos se calculan en 4 millones de escudos, de los cuales Angola y Mozambique deberán pagar cada una 1.700.000 escudos y el Territorio 600.000 escudos.

214. No se dispone de informaciones con respecto al presupuesto de 1965 ni con respecto al cálculo presupuestario para 1966. Como ocurre con Cabo Verde, si bien los ingresos ordinarios aumentaron de 59 millones de escudos a 67 millones entre 1960 y 1963, el presupuesto total, con inclusión de los ingresos extraordinarios, señaló una tendencia opuesta, disminuyendo de 117 millones de escudos en 1961 a 111.700.000 en 1962 y a 104.500.000 en 1963.

215. Si bien hubo un excedente presupuestario en cada uno de los años del período 1961-1963, los gastos

de desarrollo en virtud del presupuesto extraordinario disminuyeron de 51.800.000 escudos en 1961 a 40.400.000 en 1962 y 34.500.000 en 1963. Entre 1961 y 1963 los gastos del servicio de la deuda pública aumentaron en un 30%, de 6.100.000 escudos a 7.800.000. Los gastos de los servicios de educación pública aumentaron del 6,2% al 6,8% del presupuesto ordinario; pero los de servicios sanitarios disminuyeron del 22,8% al 11,8%.

216. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 33, 120 y 121), en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* se invertirá en el Territorio un total de 180 millones de escudos. Sin embargo, como el Territorio no dispone de recursos financieros propios, el Plano prevé que la suma total se financiará con cargo al Gobierno Central de Portugal.

217. En 1965 se hicieron asignaciones especiales por una suma aproximada de 21 millones de escudos para la financiación de diversos proyectos previstos en el *Plano Intercalar de Fomento*. De este total, 7.100.000 escudos se destinaron a puertos, navegación y medios de transporte; 2.900.000 escudos a energía eléctrica; 5.700.000 escudos a vivienda y mejoras locales; más de 2 millones de escudos para cartografía; 1.100.000 escudos para sanidad y bienestar y 750.000 escudos para educación.

218. A fines de año se autorizó al Ministerio de Hacienda que concediese anualmente al Territorio los fondos necesarios para la ejecución del *Plano Intercalar de Fomento*. En enero de 1966 se informó que los préstamos concedidos al Territorio en 1965 ascendieron a 36 millones de escudos. Entre otras medidas que se tomaron figura la creación de un comité técnico para planificación e integración económicas destinado a coordinar los proyectos de desarrollo; se autorizó además al Gobierno territorial a que estableciese un fondo especial de préstamos (Caixa de Crédito de São Tomé e Príncipe) (Decreto No. 46.358 de 28 de mayo de 1965) destinado a proporcionar préstamos para la agricultura, industria (con inclusión de pesca y minería) y construcción de edificios, incluso de vivienda. Este fondo se financiará con los propios recursos del Territorio y se espera que constituirá un conducto para la movilización de los ahorros locales. Uno de los principales objetivos que persigue el fondo consiste en estimular la introducción de nuevos cultivos de exportación, principalmente de bananas y piña, en vista de la continua baja que están experimentando los precios en el mercado mundial de los tradicionales cultivos de exportación del Territorio.

219. Los principales cultivos de exportación del Territorio son el cacao, café, aceite de palma, coco y copra. Sin embargo, como se informa en el *Plano Intercalar de Fomento*, la producción de cacao, que se cultiva en una extensión aproximada de 27.000 hectáreas, permaneció casi estacionaria entre 1953 y 1962; la de café, que se cultiva en unas 2.500 hectáreas, disminuyó levemente, principalmente durante el período 1960-1962; la de coco (que se cultiva en 4.000 hectáreas) y la de aceite de palma, representaron en 1962 el 66% y el 38%, respectivamente, del volumen de la producción de 1953. Si bien más o menos el 90% de la producción procede de las grandes plantaciones, el rendimiento se ha mantenido bajo debido en parte a agotamiento y a un ritmo insuficiente de renovación de las palmas.

220. En tres conferencias que se dieron en 1965 en el curso de extensión universitaria de Lisboa sobre los Territorios de Ultramar, se señaló a la atención la urgente necesidad en que se encuentran Santo Tomé y Príncipe de mejorar la situación agrícola y reorganizar el sistema de aprovechamiento de la tierra con el fin de aumentar la productividad y reducir los costos de producción. Se está estudiando la posibilidad de organizar un cultivo en amplia escala de la banana, pero no se sabe todavía con certeza si sería suficientemente aprovechable.

221. Las islas tienen también un problema demográfico. El *Plano Intercalar de Fomento* calcula que sólo 3.500 personas están empleadas en las plantaciones y unas 20.000 se ocupan en agricultura por su propia cuenta. Como se espera que la población del Territorio aumente de una cifra calculada en 50.200 en 1965 a 66.500 en 1975, y la población activa de 28.100 a 37.200, el *Plano Intercalar de Fomento* se propone ofrecer nuevas oportunidades en la agricultura mediante modificaciones que se harán en la reglamentación de la mano de obra. Existe un proyecto encaminado a asentar 200 familias en el período 1965-1967 en la tierra que se encuentra disponible en la isla de Santo Tomé. Se calcula que el gasto de asentamiento de cada familia ascenderá a 70.000 escudos.

222. En marzo de 1966 uno de los diputados dijo a la Asamblea Nacional en Lisboa que no obstante los préstamos hechos por el Gobierno Central, al Territorio le estaba resultando difícil cumplir con el *Plano de Fomento*, y que posiblemente no podría alcanzar los objetivos fijados por la carga financiera que suponen. Sugirió que el Gobierno Central exonerase al Territorio de los pagos de interés sobre los préstamos que se le conceden para el desarrollo.

Educación

223. Las últimas estadísticas disponibles sobre la educación en el Territorio corresponden al año 1963. Los servicios escolares comprendían entonces 30 escuelas primarias (14 públicas y 16 particulares) con 120 maestros y 4.992 estudiantes; una escuela secundaria (*liceo*) con 37 maestros y 583 estudiantes; y una escuela profesional elemental con 9 maestros y 91 estudiantes. La matrícula escolar total era de 5.732 alumnos, entre los que se incluían 66 alumnos de jardín de infantes.

7. Macao

Evolución constitucional y política

224. En las elecciones presidenciales de julio, el Territorio estuvo representado en el Colegio Electoral por los cinco miembros siguientes: el diputado a la Asamblea Nacional, el miembro de la Cámara Corporativa, un representante de concejos municipales y dos miembros del Consejo Legislativo del Territorio.

225. Macao cuenta con un miembro en la Asamblea Nacional. No existen datos sobre los resultados de la elección a la Asamblea Nacional celebrada en noviembre.

Situación económica y financiera

226. En 1965 los gastos totales de las fuerzas armadas de Macao ascendieron a 24.700.000 escudos. La asignación para el ejército fue de 23.900.000 escudos,

de los cuales 13.300.000 procedieron del presupuesto del propio Territorio; 1.300.000 escudos de "servicios autónomos"; 4.700.000 escudos de Portugal y 3.200.000 del fondo de defensa militar de ultramar. La asignación para las fuerzas navales fue de 829.800 escudos procedentes del presupuesto territorial (Ordenes 21.077, 21.179, 21.180). El total de la contribución aportada por el Territorio a estos gastos fue de 14.200.000 escudos. En septiembre de 1965 se informó que había en el Territorio unos 4.000 soldados procedentes de Angola y Mozambique. No existen datos sobre el presupuesto de 1965 ni sobre los cálculos presupuestarios para 1966. En oposición a lo que ocurre en Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, tanto los ingresos ordinarios como los extraordinarios aumentaron durante el período 1960-1963. Los ingresos ordinarios aumentaron de 113.100.000 escudos en 1960 a 195.100.000 escudos en 1963, y los ingresos extraordinarios de 12.500.000 a 42 millones de escudos. Durante este período los gastos ordinarios aumentaron de 103.400.000 escudos a 167.200.000; se duplicaron los gastos de educación pública y los gastos sanitarios aumentaron en más del 50%, de 7.600.000 escudos a 11.600.000. En 1963 los gastos del servicio de la deuda pública del Territorio fueron de poco más del 1% de los gastos ordinarios, los de educación ascendieron a 3,3% y los de sanidad a más o menos el 7%.

227. En 1965 se suprimió en Macao el impuesto de defensa (Decreto-ley No. 46.167 de 20 de enero) y en su lugar se asignó el 25% del *imposto complementar* como ingreso del fondo de defensa militar de ultramar.

228. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 35 y 126), se invertirá en el Territorio un total de 660 millones de escudos, asignándose casi la tercera parte de esta suma al fomento del turismo. A diferencia de lo que ocurre con los demás Territorios más pequeños, el *Plano Intercalar de Fomento* considera que el Territorio podrá financiar la totalidad del programa sin recurrir a fuentes externas. Se espera que el 80% del total provenga de fuentes privadas y el 18% (120 millones de escudos) se financiará con cargo al presupuesto del Territorio (20 millones del presupuesto ordinario y 100 millones del presupuesto extraordinario).

229. El turismo ha aumentado en los últimos años, en 1964 más de 1 millón de turistas visitaron el Territorio. En Macao se ha establecido un número considerable de nuevas industrias, y si bien se informa que ha aumentado el comercio exterior y que las exportaciones pasaron de 600 millones de escudos en 1964, no se tienen todavía cifras detalladas disponibles. El oro sigue siendo un rubro importante en el comercio de Macao, y se informa que en 1966 se importaron 1.400.000 onzas de oro. En 1965 se aumentó el impuesto sobre el oro, que asegura actualmente al Gobierno un ingreso garantizado mínimo de 1.400.000 dólares al año. El total de las importaciones de 1965, con inclusión del oro, se evaluó en 46 millones de dólares, y las exportaciones en 21 millones de dólares. Los principales rubros de exportación fueron los productos textiles y el pescado.

Educación

230. Las últimas estadísticas escolares disponibles corresponden al año 1963. Había entonces 43 escuelas primarias (14 públicas y 29 particulares), dotadas de 403 maestros y con una matrícula de 13.775 estudian-

tes; 13 escuelas secundarias académicas (1 pública y 12 particulares) con 258 maestros y 4.705 estudiantes; 3 escuelas vocacionales técnicas con 34 maestros y 521 estudiantes. La comunidad china tenía además 158 escuelas primarias con 36.737 estudiantes, 35 escuelas secundarias con 5.205 estudiantes y una escuela especial con 18 estudiantes. La matrícula escolar total de 1963 fue de 59.714 estudiantes, entre los cuales figuraban 3.977 niños en jardines infantiles y 105 funcionarios públicos en los cursos de capacitación.

8. Timor

Evolución constitucional y política

231. En las elecciones presidenciales celebradas en julio, el Territorio estuvo representado en el Colegio Electoral por los cinco miembros siguientes: el diputado a la Asamblea Nacional, el miembro de la Cámara Corporativa, un representante de concejos municipales y dos miembros del Consejo Legislativo del Territorio.

232. Timor cuenta con un representante en la Asamblea Nacional. No se tienen datos sobre la cifra del electorado o el número de personas que votaron en las elecciones de noviembre de la Asamblea Nacional.

Situación económica y financiera

233. En 1965 los gastos totales de las fuerzas armadas para el Territorio fueron de 27.800.000 escudos. La asignación para el ejército fue de 26.100.000 escudos, de los cuales 3.500.000 procedieron del presupuesto territorial, 22 millones de Portugal y 534.500 del fondo de defensa militar de ultramar. La asignación para la armada fue de 1.700.000 escudos, en que la contribución del Territorio ascendió a 1 millón de escudos. El costo total de las fuerzas armadas para el Territorio ascendió a 4.500.000 escudos.

234. No se tienen datos sobre el presupuesto del Territorio para 1965 ni sobre el cálculo presupuestario para 1966. En 1964 el presupuesto ordinario fue de 70 millones de escudos en comparación con 66.500.000 en 1963, 65.200.000 en 1962 y 54.600.000 en 1961. Sin embargo, en 1964 sólo 59 millones de escudos procedían de los propios ingresos del Territorio y el saldo se cubrió con excedentes presupuestarios de años anteriores y subsidios procedentes de Angola, Mozambique y Macao.

235. En cada uno de los años del período 1961-1963 los ingresos extraordinarios del Territorio, que se utilizaron casi en su totalidad para proyectos básicos de desarrollo, igualaron aproximadamente al total de los ingresos ordinarios. La deuda pública del Territorio es sumamente reducida y los gastos de servicio de la deuda en 1963 no alcanzaron al 1,5% de los gastos ordinarios. En la inauguración del período de sesiones del Consejo Legislativo en 1965, el Gobernador del Territorio declaró que los reducidos recursos del Territorio no bastaban para proveer adecuadamente a sus necesidades administrativas y de desarrollo. A menos que recibiese subsidios externos, el Territorio sólo podría costear los servicios administrativos más fundamentales.

236. En 1963 el costo de mantenimiento de las fuerzas armadas en el Territorio ascendió a 5.100.000 escudos, lo que representa más o menos el 8% de los gastos ordinarios totales; los gastos directos en servicios de educación pública fueron de 2 millones de escudos y los subsidios pagados a misiones católicas para

servicios de educación ascendieron a 3.100.000 escudos. Los gastos sanitarios fueron de 6.400.000 escudos, o sea poco más del 10% de los gastos ordinarios totales.

237. Como se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 35 y 129 a 132), en virtud del *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* se deberá invertir un total de 270 millones de escudos. Al elaborarse el *Plano* se previó al comienzo que el Territorio tendría un excedente presupuestario de 5 millones de escudos a fines de 1964, y otros 27 millones de escudos por concepto de excedentes entre 1965 y 1967, pero debido a compromisos anteriores contraídos sobre dichos fondos, se dispondrá de sólo 11 millones de escudos para proyectos de desarrollo. Se decidió en consecuencia que la cifra total de 270 millones de escudos tendría que financiarla el Gobierno Central de Portugal.

238. En junio de 1965 se hizo una asignación especial de 12 millones de escudos pagada en forma de subsidios del Gobierno Central al Territorio para diversos proyectos previstos en el *Plano Intercalar de Fomento*. De dicho total, 10 millones se asignaron a medios de transporte y comunicaciones, distribuyéndose en la forma siguiente: carreteras, 1.300.000 escudos; puertos y navegación, 4 millones; telecomunicaciones, 4.800.000; 711.000 escudos para desarrollo de la agricultura, silvicultura y ganadería; 526.000 para industrias; 272.000 para educación y 73.000 para proyectos sanitarios.

239. A fines de 1965 se aprobó una ley que autorizaba al Ministro de Hacienda a conceder préstamos al Territorio para el *Plano Intercalar de Fomento* (véase más arriba el párr. 57). En enero de 1966 se informó que Portugal había otorgado un préstamo de 56 millones de escudos al Territorio para la ejecución del *Plano Intercalar de Fomento* en 1965. Dicha cifra representaba menos de los dos tercios del promedio anual de inversiones previstas en el *Plano*.

240. Los principales productos de exportación del Territorio son el café, copra y caucho, que representaron, respectivamente, el 73%, el 11% y el 9% del valor total de las exportaciones en 1962. Debido al aumento de las importaciones, especialmente con fines de construcción, el Territorio tenía en 1964 un déficit comercial de 22 millones de escudos. Una de las causas que contribuyeron a este déficit comercial fue la baja en las exportaciones de café a 1.332 toneladas, en comparación con 2.523 toneladas en 1963. Debido además al mal tiempo y a una mala cosecha, el Territorio había tenido que importar unas 1.000 toneladas de maíz y 40 toneladas de arroz.

241. Como se señaló en el *Plano Intercalar de Fomento*, el Territorio tiene muy pocas industrias u otras empresas fuera de las que se dedican al comercio, y como consecuencia de ello sólo una cifra aproximada de 3.000 a 6.000 personas (de una población total de 517.000 según el censo de 1960) se encuentran en empleo pagado fuera del sector tradicional. Para estimular el desarrollo agrícola, en 1965 se extendió a Timor (Orden 21.283 de 11 de mayo) la ley de concesión de tierras de 1961 (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II). Las concesiones de tierras pueden ahora hacerse gratis a los colonos así como al personal militar que se encuentra en licencia indefinida (*militares licenciados*), aun cuando no estén estacionados en el Territorio.

242. En noviembre de 1965 se autorizó al Gobierno de Timor a crear un fondo especial de crédito agrícola (Caixa Agro-Pecuária de Timor) con el fin

de fomentar los préstamos a medio y a largo plazo para proyectos agrícolas y ganaderos. En casos excepcionales el fondo puede también conceder préstamos a corto plazo como capital de trabajo. El fondo deberá también proporcionar otros servicios tales como arriendo de equipo agrícola y animales reproductores.

243. En diciembre de 1965 uno de los diputados declaró ante la Asamblea Nacional que si bien los subsidios y préstamos del Gobierno Central habían proporcionado al Territorio ciertos servicios, con inclusión del aeropuerto internacional de Bancau, que según los informes costó 5 millones de dólares, la expansión del puerto de Dili, el suministro de electricidad para la capital del Territorio y nuevas carreteras, el Territorio se enfrentaba todavía con graves problemas económicos. Sugería que se necesitaban aún mayores esfuerzos, principalmente, por ejemplo, para aumentar el turismo.

Educación

244. En 1963 había 165 escuelas primarias (120 fiscales y 45 particulares) con 494 maestros y 16.500 alumnos y una escuela secundaria con 23 maestros y 368 alumnos. Había además 18 escuelas primarias y una secundaria fuera del sistema escolar oficial, con una matrícula de 1.423 alumnos. La matrícula total de 1963 fue de 18.426 alumnos, entre los cuales figuraban 12 alumnos de jardines infantiles, 79 funcionarios públicos que seguían cursos de capacitación y 44 estudiantes eclesiásticos.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

245. El Comité Especial se ocupó de la situación en los Territorios bajo administración portuguesa en sus sesiones 418a., 419a., 420a., 427a., 436a. y 450a. a 455a., celebradas en Africa del 25 de mayo al 22 de junio de 1966.

246. Con relación a la cuestión de los refugiados de los Territorios bajo administración portuguesa, el Comité Especial tuvo a la vista una nota de la Secretaría (A/AC.109/L.293 y Add.1) relativa a la situación con respecto a los refugiados de Angola, Mozambique y la Guinea bajo administración portuguesa, así como sobre las medidas adoptadas para prestarles ayuda material y de otra índole por conducto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los organismos especializados interesados, y los Estados Miembros en respuesta al párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución sobre los Territorios bajo administración portuguesa, aprobada por el Comité Especial el 10 de junio de 1965 (A/6000/Rev.1, cap. V, párr. 430) y las resoluciones 2107 (XX) y 2040 (XX) de la Asamblea General, aprobadas el 21 de diciembre y el 7 de diciembre de 1965, respectivamente.

247. Durante el examen de este tema se presentó al Comité Especial, en su 452a. sesión, un documento (A/AC.109/168) en que constaba una nota de fecha 7 de junio de 1966 dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas, por la que se transmitían comentarios acerca del documento de trabajo sobre los Territorios bajo administración portuguesa preparado por la Secretaría.

248. Después de una declaración del representante del Secretario General acerca de las circunstancias en que se distribuyó la nota como documento oficial, el

representante de la República Unida de Tanzania propuso que el Comité Especial solicitara del Secretario General que se cancelara la distribución de dicho documento y que en adelante no se distribuyera esa clase de comunicaciones como documentos oficiales del Comité sin previa consulta a este órgano.

249. Al hacer uso de la palabra a favor de la propuesta, varios representantes señalaron que, en su nota, el Gobierno de Portugal había presentado nuevamente, con relación a la situación jurídica de los Territorios bajo administración portuguesa, argumentos que habían sido rechazados concretamente por los respectivos órganos de las Naciones Unidas. Señalaron asimismo que, al dirigirse al Secretario General en vez de hacerlo al Comité Especial, el Gobierno de Portugal recurría a una maniobra encaminada a distraer la atención de sus reiteradas violaciones a los principios de la Carta y a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a los Territorios. Además, al acusar a la Secretaría de inexactitudes, declaraciones desorientadoras y sesgo político, el Gobierno de Portugal estaba atacando realmente al Comité y negándose al mismo tiempo a reconocer la validez de sus tareas y a cooperar con él. Uno de los representantes sugirió que el Comité recomendara además que la Asamblea General adoptara el procedimiento propuesto por el representante de la República Unida de Tanzania con respecto a las comunicaciones de esa índole.

250. Oponiéndose a esa propuesta, otros representantes señalaron que consideraban que todo Estado Miembro tenía derecho a que sus comunicaciones se distribuyeran como documentos oficiales, fueren o no aceptables por otros Estados Miembros las opiniones expuestas en ellas. Estimaban que apartándose de la práctica establecida a este respecto se sentaría un precedente peligroso que podría ser perjudicial para todas las delegaciones.

251. En la misma sesión el Comité aprobó la propuesta del representante de la República Unida de Tanzania, en votación nominal, por 15 votos contra 4 y 2 abstenciones.

Peticiones escritas y audiencias

252. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones escritas con relación a los Territorios bajo administración portuguesa²⁶:

Peticionario	Documento No.
<i>Angola</i>	
Sr. Nzoimbengene, Oficina de Información, Mouvement de défense des intérêts de l'Angola (MDIA)	A/AC.109/PET.427
Sres. Lukoki Lunzinga, Muanza Fernandes, Tshingani Mingiedi, Nto-Bako Angola Party..	A/AC.109/PET.428
Sr. Lukoki Lunzinga, Nto-Bako Angola Party	A/AC.109/PET.428/Add.1
Sres. Matondo Afonso-Proença, Presidente, Makumbi Edouard,	

²⁶ Con posterioridad a la adopción por el Comité Especial de una resolución relativa a los Territorios bajo administración portuguesa (párr. 675 *infra*) en su 455a. sesión, el 22 de junio de 1966, se distribuyeron las siguientes peticiones: A/AC.109/PET.428/Add.1; A/AC.109/PET.549; A/AC.109/PET.550; A/AC.109/PET.567; A/AC.109/PET.568.

<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>	<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>
Secretario General, Putuilo José Milton, Director de Asuntos Exteriores, Front patriotique pour l'indépendance du Congo dit Portugais (FPIKP)	A/AC.109/PET.429	<i>Guinea llamada Guinea Portuguesa</i>	
Sr. José Paulo Chiringueno, Presidente, Partido Nacional Africano (PNA)	A/AC.109/PET.430	Sra. Dulce Amada-Duarte, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)	A/AC.109/PET.511
Sr. Carlos Pinto Nunes Vunzi, Presidente General, União Progressista Nacional de Angola (UPRONA)	A/AC.109/PET.447	Sr. Abílio Duarte, Representante, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)	A/AC.109/PET.511/Add.1
Sr. Carlos Pinto Nunes Vunzi, Presidente General, David Muanza, Secretario General, União Progressista Nacional de Angola (UPRONA)	A/AC.109/PET.447/Add.1	Sr. Gerard Chaliand	A/AC.109/PET.516
Sr. Daniel Julio Chipenda, Representante, Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA)	A/AC.109/PET.460	<i>Territorios bajo administración portuguesa</i>	
Sr. Luis d'Almeida, Representante en Argelia, Mouvement Populaire de Liberation de l'Angola (MPLA)	A/AC.109/PET.460/Add.1	Sr. J. D'Assunção, União de Portugueses Anti-Colonialistas en Marruecos	A/AC.109/PET.549
Sres. François Lele, Presidente General, Fernando António, Vicepresidente, Kuta François, Secretario de Educación, Nto-Bako Angola Party	A/AC.109/PET.471	<i>Santo Tomé y Príncipe</i>	
Sras. Anne Mfidi, Presidenta General, Marie Luyindula, Vicepresidenta General, Roseline N'Simba, Secretaria General, Ida Maviduanga, Representante, Union des Femmes Angolaises (UFA)	A/AC.109/PET.472	Sr. Virgílio Sousa Carvalho, Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe (CLSTP)	A/AC.109/PET.512
Sr. José M. E. B. Ervedosa	A/AC.109/PET.509	Sr. Mário de Andrade, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONCP)	A/AC.109/PET.510
Sr. Mário Moutinho de Pádua, Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN)	A/AC.109/PET.513	253. El Comité Especial dio audiencia a los siguientes peticionarios en relación con Angola, Mozambique y Guinea Portuguesa:	
Sr. Manuel Sertório, Junta Revolucionária Portuguesa, Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN)	A/AC.109/PET.513/Add.1	<i>Peticionario</i>	<i>Sesión</i>
Sr. Johnny Eduardo, Representante, Gouvernement revolutionnaire de l'Angola en exil (GRAE)	A/AC.109/PET.514	<i>Angola</i>	
Sres. Luis Ranque Franque, Presidente, Antonio Eduardo Sozinho Zau, Secretario de Relaciones Exteriores, Front pour la libération de l'enclave de Cabinda (FLEC)	A/AC.109/PET.567	Sr. Daniel Júlio Chipenda, Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), representante en Dar es Salaam (A/AC.109/PET.460)	420a.
Associação dos Conguenses da Expressão Portuguesa, Ngwizani A Kongo (NGWIZAKO)	A/AC.109/PET.568	Sr. Luis d'Almeida, Mouvement Populaire de Liberation de l'Angola (MPLA), representante en Argel (A/AC.109/PET.460/Add.1)	453a. y 454a.
<i>Mozambique</i>		Sr. José M. E. B. Ervedosa (Frente Patriótica de Libertação Nacional) (FPLN) (A/AC.109/PET.509)	450a.
Sr. Uria T. Simango, Vicepresidente, Frente de Libertação de Moçambique (FRELI-MO)	A/AC.109/PET.459	Sres. Mário Moutinho de Pádua y Manuel Aligre, Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN) (A/AC.109/PET.513 y Add.1)	454a.
Sr. Narciso Mbule, Secretario de Asuntos Exteriores, Union Democratique Nationale de Mozambique (UNDENAMO)	A/AC.109/PET.481	Sr. Johnny Eduardo, Gouvernement revolutionnaire de l'Angola en exil (GRAE) (A/AC.109/PET.514)	454a.
Sr. R. M. Mjumbe, Secretario General, Mozambique African National Union (MANU)	A/AC.109/PET.550	<i>Mozambique</i>	
		Sres. Eduardo Mondlane y Marcelino dos Santos, Frente de Libertação de Moçambique (FRELI-MO) (A/AC.109/PET.459)	418a. y 419a.
		Sr. Narciso Mbule, União Democrática Nacional de Moçambique (UNDENAMO) (A/AC.109/PET.481)	
		<i>Guinea, llamada Guinea portuguesa</i>	
		Sr. Amílcar Cabral, Secretario General, Partido Africano da Independência da Guiné e Ca-	

<i>Peticionario</i>	<i>Sesión</i>
bo Verde (PAIGC), y cuatro colegas: Sra. Joyce Lusso, Sr. Justín Vieyra, Sr. Isidro Romero, y Sr. Piero Nelli (A/AC.109/PET.511 y Add.1)	451a. y 452a.
<i>Santo Tomé y Príncipe</i>	
Sr. Thomas Medeiros, Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP) (A/AC.109/PET.512)	454a.
<i>Otros peticionarios</i>	
Sr. Mário de Andrade, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) (A/AC.109/PET.510)	450a.

Audiencia de peticionarios en relación con Angola

254. El Sr. Chipenda, hablando en nombre del MPLA, declaró que en la fase actual de la lucha por la independencia inmediata y completa de Angola, toda la población de Angola ve su salvación en el MPLA, único movimiento nacionalista que dirige la lucha armada emprendida en Angola para liquidar las estructuras coloniales, defender al pueblo contra las atrocidades del ejército portugués e instalar un régimen controlado por las masas campesinas laboriosas que constituyen la aplastante mayoría de la población.

255. Añadió que era cierto que el principal campo de acción del MPLA era el territorio nacional. Toda la orientación y toda la planificación de sus actividades reflejan las exigencias de la lucha por la liberación del país.

256. Como los dirigentes del MPLA habían dado prioridad al desarrollo de las actividades en el interior del país más que en el exterior, se efectuaba en forma regular y segura un intenso trabajo de movilización de las masas, seguido de su educación política. Para mejor lograr este objetivo, el MPLA creó el Centre d'ins-truction révolutionnaire (CIR) para que sus militantes obtuvieran formación política y militar y aprendieran a conocer a su país en todos sus aspectos, con el propósito de formar cuadros revolucionarios y conquistar a las masas populares para su causa. Según sus aptitudes, los candidatos así formados serán llamados a seguir estudios universitarios, cursarán únicamente estudios secundarios o entrarán directamente a la lucha política y militar. Además, el MPLA estableció comi-sariatos políticos que trabajan en el seno de los destacados de sus guerrilleros y colaboran con las auto-ridades tradicionales de su pueblo.

257. Indicó que, como el porcentaje de analfabetis-mo en Angola asciende al 99%, el MPLA, al luchar por la independencia total y completa de su país trata-ba también de alfabetizar a su pueblo con la mayor rapidez. Había procurado manuales escolares y esta-blecido escuelas; además, consideraba la posibilidad de ofrecer enseñanza superior a los candidatos más aptos para beneficiarse con ella en el seno mismo del MPLA. Este había enviado ya más de 350 jóvenes de Angola a establecimientos de enseñanza secundaria y superior en el extranjero, para asegurar la formación de sus fu-turos cuadros. La revolución se proponía transformar todas las estructuras establecidas por el colonialismo.

Sólo con la alfabetización del pueblo de Angola se po-dría lograr este objetivo.

258. A pesar de la prohibición de llevar a cabo cualquier actividad política y revolucionaria, impuesta por las fuerzas represivas del colonialismo portugués a la población de Angola, el MPLA había conseguido constituir, dispersándolos en toda la extensión del terri-torio nacional, muchos comités de acción que realizaban trabajos clandestinos de movilización, de educación po-lítica, de sabotaje, de información sobre los despla-zamientos a las maniobras del ejército colonialista y de apoyo a sus guerrilleros.

259. La acción militar, propiamente dicha, se ejer-cía sobre todo en el distrito de Cabinda, situado al nor-te de Angola, donde los guerrilleros del MPLA lleva-ban a cabo operaciones de guerrilla, actividades de hos-tigamiento y de sabotaje que tenían en jaque a las fuer-zas portuguesas. En el distrito de Cabinda, los guerri-lleros controlaban totalmente el 30% del territorio, incluso las zonas situadas entre Miconge y Luali. Ade-más, existían puestos adelantados más hacia el interior del país, y entre otros, en las regiones de Nambuan-gongo y de Dembos, donde los comandos trataban de interceptar las nuevas columnas enemigas y el reab-sarrecimiento de las tropas portuguesas que operaban en la región de Cabinda.

260. En el año que acababa de transcurrir, los desta-camentos de guerrilleros del MPLA habían llevado a cabo en el distrito de Cabinda más de 300 operaciones contra las tropas colonialistas; 2.165 soldados enemi-gos habían sido muertos y más de 300 habían sido heridos; se habían eliminado siete traidores que ser-vían de guías en los matorrales a las fuerzas colonialis-tas portuguesas, mientras que se habían destruido com-pletamente 53 vehículos militares y civiles y habían caído en manos de los combatientes del MPLA apar-atos de radio P19, de fabricación norteamericana, ar-mas G3 y FN de fabricación belga, ametralladoras UZI de fabricación israelí²⁷ y otras armas fabricadas en la República Federal de Alemania, así como una im-portante cantidad de material de guerra de origen diverso.

261. El peticionario calculaba la importancia de los efectivos portugueses en Angola, incluidos los africa-nos, en unos 50.000, pero la confusión se acentuaba cada día más en las filas enemigas, como lo probaban las muchas tentativas de desertión, que obligaban a los servicios enemigos de seguridad a ejercer una vigilan-cia muy severa. Varios angolanos habían conseguido desertar del ejército colonialista y estaban prestando servicios en las tropas revolucionarias del MPLA. Otros cinco soldados africanos, del ejército portugués, habían sido declarados desertores.

262. El ejército portugués, para luchar contra la evasión progresiva de angolanos hacia las zonas libe-radas controladas por el MPLA, estaba tratando de ins-talar a esa gente alrededor de sus cuarteles militares, lo que, en cierta medida, entorpecía la acción de las tropas del MPLA. El MPLA estaba logrando vencer esta dificultad.

263. Como consecuencia de las operaciones de gue-rrilla del MPLA, los colonialistas portugueses se ha-

²⁷ Véanse cartas, de fechas 12 de septiembre y 25 de octubre de 1966, dirigidas al Presidente del Comité Especial por el Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas (A/AC.109/212).

bían visto obligados a abandonar la explotación de bosques en Cabinda, y eso había afectado gravemente su situación económica. Los aserraderos estaban totalmente paralizados y su personal buscaba trabajo en las grandes ciudades de Angola.

264. La población angolana integrada en las zonas liberadas y los refugiados tomaban parte activa en la lucha, ya fuese constituyendo milicias populares o participando en los trabajos agrícolas de estas zonas. Otros grupos ayudaban en las redes de información y colaboraban en el sabotaje de las empresas colonialistas.

265. Para tener en cuenta las exigencias de la lucha de liberación, el MPLA buscaba por todos los medios intensificar el adiestramiento militar de los nuevos militantes en la zona liberada o en países amigos, lo que le permitía aumentar considerablemente sus efectivos militares. Se contaba más o menos con las condiciones esenciales y los medios materiales necesarios para ello. Pero la falta de libertad de acción en los países limítrofes de Angola y la imposibilidad de hacer transitar armas y hombres a través de esos países, dificultaba la creación de nuevos focos de combate y, por consiguiente, la extensión de la lucha de liberación nacional a todo el territorio de Angola.

266. Añadió que los colonialistas portugueses habían reforzado recientemente sus medidas de represión y habían intensificado el adiestramiento militar con ayuda de sus aliados, ya bien conocidos en Angola por los actos de bandolerismo perpetrados contra la población local.

267. Los periódicos y la radio continuaban lanzando llamamientos a los colonos para incitarlos a participar en el adiestramiento y repetían el proverbio: "Un hombre prevenido vale por dos". También se había intensificado el adiestramiento de los paracaidistas civiles voluntarios, destinados a proteger a los colonos portugueses.

268. Al mismo tiempo, Portugal quería aplicar en Angola, en Mozambique y en la Guinea llamada Portuguesa una política de población. Pretendía convertir cada uno de estos países en una especie de nuevo Brasil. Una ley votada en 1961 disponía que familias europeas poblarían los territorios de ultramar. Al lado de los colonos portugueses habían de instalarse, y ya lo habían hecho, muchos súbditos de otros países. De conformidad con ciertos cálculos, unos diez mil portugueses salían cada año de Portugal rumbo a Angola, Mozambique y la Guinea llamada Portuguesa. Se enviaban colonos a Angola y se les ofrecían tierras de cultivo y todas las facilidades necesarias para explotarlas. En las dos principales regiones destinadas a recibir población, millares de colonos se habían apoderado por la fuerza de las mejores tierras, y habían dejado a los desgraciados angolanos unas zonas que no bastaban para asegurar la subsistencia de la población autóctona. Se instalaba a los colonos particularmente en Madale y Ansela y recibían la ayuda de técnicos extranjeros. Portugal había concluido acuerdos al efecto con la República Federal de Alemania, cuyos ciudadanos gozaban de gran influencia en Angola.

269. Aunque en 1965 se habían celebrado elecciones para la Asamblea Nacional, el peticionario dijo que, dada la forma en que las elecciones se desarrollaron en Portugal y en Angola, no se podía conceder ninguna importancia a sus resultados. En todo caso, se trataba de maniobras portuguesas destinadas a proporcionar

una idea falsa de la estabilidad del régimen de Salazar. En realidad, toda forma de lucha y de organización política estaba prohibida en Angola. La policía fascista (PIDE) estaba instalada allí y se infiltraba dentro de la población para espiar y tratar de conocer sus actividades secretas en pro de la liberación.

270. En las ciudades, las cárceles estaban llenas de patriotas angolanos; hacía poco los colonialistas habían arrestado a 400 autóctonos en las ciudades de Luanda, Lobito, Benguela y Nova-Lisboa. En el mes de abril pasado, habían sido arrestados y juzgados cinco muchachos y dos muchachas acusados de ser militantes del MPLA. Tres de ellos fueron sentenciados a penas de tres años y medio a ocho años y medio de prisión. Lo mismo ocurría en Portugal. La sangre corría en las prisiones de Salazar. Había sido necesario internar en hospitales psiquiátricos a dos combatientes por la libertad. Tres otros fueron condenados a penas que iban de tres años y medio a ocho años y medio de prisión. No se podían contar los crímenes de la PIDE, que perseguía cruelmente a la población para impedirle participar en la lucha por la independencia.

271. Todas esas medidas de represión no habían tenido ninguna influencia en la población de Angola, que sabía a qué atenerse sobre las intenciones del enemigo. El pueblo angolano continuaba luchando vigorosamente por la independencia nacional de su país.

272. Esa lucha representaba otro aspecto muy importante, que rebasaba el marco puramente nacional: la estrecha cooperación entre el MPLA y las organizaciones revolucionarias de las demás colonias portuguesas, en el seno de la Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP). El peticionario añadió que ese organismo agrupaba exclusivamente a las organizaciones verdaderamente revolucionarias y representativas de los pueblos de las colonias portuguesas y constituía en la actualidad una fuerza poderosa en la lucha por la liberación de Angola, de la Guinea llamada Portuguesa, de Mozambique y de Santo Tomé y Príncipe. En efecto, la CONCP desempeñaba el papel de catalizador que llevaba a las fuerzas populares a unirse en la lucha contra el colonialismo portugués, y fortalecía al mismo tiempo la unidad en el orden interno. El MPLA, el PAIGC, el FRELIMO y el CLSTP se presentaban por primera vez en la historia de los movimientos de liberación como un bloque sólido y unido.

273. Parecía extraño que un país pequeño como Portugal pudiera conservar un imperio colonial tan vasto, donde actualmente existían tres frentes de combate. De hecho, esa situación se explicaba por el apoyo macizo que los países imperialistas agrupados en el seno de la OTAN concedían al Gobierno portugués. Como se sabía, la República Federal de Alemania, el Reino Unido, Francia, Bélgica y los Estados Unidos de América tenían interés en la explotación de las riquezas de las colonias portuguesas, particularmente, de las de Angola. Ahora bien, la dominación colonial portuguesa les permitía proseguir y aun intensificar su política de saqueo de las riquezas del país.

274. La ayuda que los países imperialistas prestaban a Portugal se presentaba bajo dos aspectos principales: como ayuda directa a Portugal en su política de represión y como sabotaje del movimiento de liberación nacional.

275. La ayuda directa, que permitía al Gobierno portugués hacer frente a la lucha de liberación nacio-

nal en sus colonias, adoptaba tres formas principales: apoyo militar, apoyo político y diplomático y apoyo económico.

276. En efecto, el material de guerra (aviones, bombas de napalm, tanques, armas de toda suerte, etc.) utilizado por Portugal procedía de la República Federal de Alemania, de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia y de Bélgica. Por una parte, esa ayuda se situaba en el marco de la OTAN, ya que Portugal, en su carácter de miembro de la OTAN, tenía derecho a recibir asistencia militar de dicha organización. Por otra parte, la ayuda se traducía por acuerdos bilaterales concluidos entre Portugal y sus aliados. En esta forma, bajo la máscara de asistencia a un miembro de la OTAN, los Estados Unidos y la República Federal de Alemania proporcionaban una importante cantidad de material a los colonialistas portugueses.

277. El apoyo político y militar concedido a Portugal por sus aliados se manifestaba, por ejemplo, en las Naciones Unidas, donde los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido saboteaban las resoluciones, votadas por aplastantes mayorías, que condenaban la política colonial portuguesa; se manifestaba asimismo en los organismos internacionales, donde esas Potencias trataban de impedir que se adoptaran medidas contra Portugal; se manifestaba también mediante la fuerte presión ejercida sobre los países limítrofes de las colonias portuguesas, para llevarlos a prohibir las actividades de los movimientos nacionalistas en su territorio.

278. Al respecto, el peticionario recordó la posición hostil adoptada por la República Democrática del Congo frente al MPLA. Desde julio de 1963, las autoridades congoleñas manifestaban, con las dificultades que creaban al MPLA, que no tenían en cuenta las resoluciones aprobadas por la Organización de la Unidad Africana. Hacía muy poco tiempo que la OUA, reunida en período de sesiones ordinario en Accra, del 21 al 25 de octubre de 1965, había aprobado una resolución en que se pedía a todos los países vecinos de las colonias portuguesas que concedieran mayor libertad de acción y de circulación a los hombres y al material necesarios al rápido triunfo de la campaña de los movimientos de liberación.

279. En respuesta a una pregunta, declaró que la cooperación militar y política entre las Potencias coloniales africanas se hacía cada día más estrecha. Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur habían firmado un pacto tripartito. Portugal había sido el primer país del mundo en aceptar que el Gobierno de Ian Smith instalara una representación diplomática en su territorio, hecho que por sí solo bastaba para demostrar que efectivamente existía una alianza entre Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur. Esta última podía recibir petróleo desde Angola porque Portugal había concluido con ella una alianza que le permitía ayudar al Gobierno de Ian Smith. Por otra parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal había declarado hacía poco que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas era libre de aplicar a su manera las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

280. Además, los aliados de Portugal, incluida la República Federal de Alemania, seguían prestando ayuda material y militar a Portugal. El MPLA estaba en situación de demostrar la complicidad entre la Repú-

blica Federal de Alemania y Portugal porque había estudiado a fondo la cuestión y podía señalar al Comité casos concretos de cooperación entre ambas Potencias. Esta cooperación se manifestaba en todas las esferas. La República Federal de Alemania había donado recientemente 40 millones de dólares a Portugal. Le había enviado sesenta aviones militares. Le proporcionaba armas en gran cantidad. Construía en Portugal una importante base militar cuyos instructores eran alemanes. Había instalado en el territorio portugués hospitales donde se atendía a los heridos del ejército portugués y también, cerca de Lisboa, una importante fábrica de municiones cuyos técnicos eran alemanes. El peticionario puso a disposición de la Secretaría un documento en que se exponían todos esos hechos y se mostraba que el ejército portugués recibía de la República Federal de Alemania asistencia técnica directa. Añadió que el Gobierno portugués enviaba tropas a Angola a medida que la República Federal de Alemania le enviaba, por su parte, tropas alemanas para la seguridad de Portugal. La importancia de los efectivos alemanes era difícil de evaluar.

281. Por lo que hacía al apoyo económico, éste se concedía al Gobierno portugués a cambio de importantes concesiones. Gracias a ese apoyo Portugal podía vencer muchos obstáculos, mientras que los capitales extranjeros se invertían en Portugal y en sus colonias. Portugal no buscaba en sus aliados solamente una ayuda militar para luchas contra los movimientos de liberación; trataba también de desarrollar la economía de los colonos.

282. En cuanto al sabotaje del movimiento de liberación nacional por fuerzas imperialistas, éste se manifestaba en dos formas principales: lucha contra la acción de las fuerzas nacionalistas auténticas y apoyo prestado a las agrupaciones políticas o a los individuos atraídos por la transacción neocolonialista y hostiles a la lucha armada revolucionaria. El imperialismo, bajo sus múltiples formas, trataba en especial de destruir el MPLA o de impedirle intensificar su campaña por la liberación de Angola.

283. Se declaró convencido de que todos los organismos internacionales se verían un día obligados a sostener la lucha de su pueblo. Alabó los esfuerzos de las Naciones Unidas y del Comité Especial para prestar ayuda a los movimientos de liberación y dijo que esperaba que la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas prosiguiese sus tareas y obligase a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General. Si bien era exacto que, por el momento, algunas organizaciones internacionales eran hostiles a los movimientos de liberación, esa hostilidad se fundaba en motivos bien conocidos que habían sido revelados. Por el contrario, el pueblo de Angola gozaba del apoyo incondicional de la Organización de la Unidad Africana, de la Organización de los pueblos africanos y asiáticos y, desde hacía poco, de la Conferencia Tricontinental. Las instancias africanas superiores se habían definido a favor del MPLA. En esta forma, la Conferencia de la Organización de la Solidaridad Afrosiática había reconocido al MPLA como el único representante valedero del pueblo de Angola en la lucha por la liberación nacional. Posición idéntica acababa de ser adoptada por la Conferencia Tricontinental, lo que confirmaba una vez más el reconocimiento del MPLA como la única fuerza revolucionaria en Angola.

284. El 10 de junio de 1965 el Comité Especial de las Naciones Unidas había aprobado en Dar es Salaam una resolución por la que invitaba a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y en particular a los aliados militares de Portugal en el seno de la alianza atlántica, a cesar de proporcionar armas y municiones a ese país mientras el Gobierno portugués se negase a renunciar a su política de dominación colonial. La resolución había sido aprobada por 18 votos contra 2 (Estados Unidos y Gran Bretaña) y 3 abstenciones (Australia, Dinamarca e Italia).

285. Como el Gobierno portugués seguía, el MPLA tenía que formular una vez más un llamamiento a los miembros del Comité Especial para que se respetaran las decisiones de las Naciones Unidas sobre las sanciones aplicables a Portugal.

286. El MPLA se consagraba a la defensa de los intereses de las masas campesinas y trabajadoras de Angola. El MPLA trataba de intensificar la lucha armada, que era la única que conduciría al pueblo de Angola a la independencia total y completa. Por ello pedía al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre colonialismo que hiciera lo necesario para que todos los países limítrofes de los países oprimidos se beneficiaran con una ayuda material que les permitiera sostener eficazmente todos los movimientos de liberación.

287. El Sr. D'Almeida, hablando en nombre del MPLA, indicó a los miembros del Comité Especial que, como los peticionarios procedentes ya habían dicho casi todo sobre la situación en Angola, no se explayaría sobre el tema, especialmente teniendo en cuenta que ya se había presentado al Comité Especial un proyecto de resolución sobre dicha cuestión.

288. Sin embargo, en nombre de su pueblo en armas quería expresar la alegría y el orgullo que experimentaba al presentarse ante el Comité Especial en la siempre gloriosa tierra de Argelia. Afirmó que el pueblo angolano y el MPLA estaban entre los que más habían ganado con la fidelidad de Argelia al ideal de la liberación nacional.

289. Añadió que la liberación de un pueblo debería ser ante todo la obra del pueblo mismo. Su liberación de la dominación criminal del colonialismo y del imperialismo dependía de su genio, de sus capacidades revolucionarias, de su confianza en sí mismo. Ya no era hora de lamentaciones; de nada serviría condenar los sistemas de opresión pues éstos no prestaban atención a tales condenas. La única manera de responder al colonialismo era asestarle golpes mortales. Al pueblo angolano no le gustaba la guerra, pero proseguiría la lucha hasta el fin, es decir, hasta la liberación total del Territorio.

290. Hacía algunos días que los combatientes de la libertad habían ampliado el frente de lucha y lo habían llevado al centro y al este del país. Hasta la fecha las fuerzas portuguesas sólo habían encontrado resistencia armada en el norte. Desde el mes de mayo último, las tropas angolanas habían volado varios puentes estratégicos e infligido pérdidas graves al ejército colonial portugués. En particular, los combatientes de la libertad habían asestado golpes terribles al ejército de Salazar en las regiones donde las grandes compañías mineras extranjeras explotan con mayor ferocidad a la población autóctona. Esas compañías mantenían tropas de mercenarios belgas, portugueses, sudafricanos y de Alemania occidental, que aterrorizaban a la población campesina.

291. Declaró que deseaba señalar a la atención de los miembros del Comité Especial el peligro permanente de una intervención de Sudáfrica en Angola, ya que se ha concluido un pacto militar entre Verwoerd, Salazar y Ian Smith, representantes del fascismo. Dicho pacto preveía la intervención directa de los signatarios en el caso de que se ampliara la acción revolucionaria. A este respecto, en un diario de Sudáfrica, *The Star*, de Johannesburgo, se había dicho en noviembre de 1964 que el sistema defensivo de Sudáfrica, en el plano terrestre, dependía en la actualidad de las posibilidades de defensa local en Mozambique, Angola y Rhodesia de Sur, y que indudablemente Sudáfrica no permanecería inactiva si uno de esos bastiones se encontrase amenazado.

292. Como para ilustrar ese pacto militar entre criminales imperialistas, grupos de policías armados provenientes del África Sudoccidental habían atravesado, no hacía mucho, la frontera meridional de Angola y habían procedido a efectuar detenciones en masa entre los dirigentes políticos y militares de la región. Probablemente esos militantes habían sido exterminados luego por la policía de Verwoerd.

293. Añadió que su partido deseaba que el Consejo de Seguridad, a fin de poner término a la agresión portuguesa, decidiera imponer un embargo total sobre la venta y el envío de armas y municiones a Portugal por sus aliados y amigos. A este respecto, recordó que dos aldeas de la República del Congo habían sido bombardeadas recientemente por la aviación portuguesa a título de represalia, y dijo que los países hermanos situados en las fronteras de Angola, que acogían en su suelo a los dirigentes de los movimientos revolucionarios — o sea Senegal, Guinea y la República del Congo — estaban igualmente amenazados por los criminales portugueses. Así, en febrero último, Salazar, furioso al ver que Zambia, Tanzania y Malawi daban apoyo a los movimientos revolucionarios, había amenazado a dichos países con una intervención militar.

294. El MPLA deseaba también que las Naciones Unidas y sus organismos especializados, por ejemplo el UNICEF, la OMS, la UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, prestasen ayuda a los refugiados y a la población de los territorios ya liberados, en materia de sanidad, educación y desarrollo económico y social.

295. El representante del MPLA terminó afirmando su fe en el porvenir del pueblo angolano que, en las prisiones, en los montes y en las selvas de Angola, construía ya la Angola de mañana, una Angola libre, democrática y fraternal.

296. El Sr. Ervedosa, miembro de la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional, haciendo uso de la palabra como peticionario de Angola, dijo que había pasado exactamente 663 días en Angola, desde el 21 de abril de 1961 hasta el 10 de febrero de 1963, en calidad de oficial de las fuerzas aéreas portuguesas. Durante ese tiempo había desempeñado funciones de oficial adjunto de operaciones de estado mayor del Mando de la 2a. región aérea (Angola) y, durante los dos últimos meses del período citado, las de comandante de la 91a. escuadrilla de bombarderos tácticos Lockheed "Harpoon" PV-2 (Luanda). Aunque apolítico — como la inmensa mayoría de los militares de carrera portugueses — su conciencia le indujo a oponerse activamente a la guerra colonial. Denunciado por un camarada, fue expulsado ilegalmente del ejército y detenido durante ocho meses y medio, para investiga-

ción de su caso, en la cárcel de presos políticos de Aljube, en Lisboa. Como la policía política no pudo hallar motivos políticos a su gesto de rebeldía, no se le llegó a juzgar siquiera.

297. Declaró que la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal englobaba a oponentes portugueses de diversas tendencias políticas en la lucha contra el fascismo y el colonialismo, y que no se había adherido a ella hasta después de emigrar clandestinamente de Portugal, con intención de actuar contra la guerra colonial y dar testimonio de la serie de hechos que le indujeron a dar forma concreta a las graves decisiones que pusieron fin a su carrera militar.

298. Aclaró que se limitaría a citar hechos comprobados por él directamente, sin entrar en detalles. Sin embargo, en el curso de sus relaciones diarias con el ambiente social en que vivió, los testimonios que había recogido eran tan variados como elocuentes; en general, se trataba de confidencias personales, testimonios tan probatorios como necesariamente anónimos.

299. Quería ofrecer al Comité el testimonio de personas que habían vivido la guerra de Angola y que allí habían aprendido a detestar la guerra.

300. Ciertamente era que todos los horrores, todos los crímenes cometidos en Angola por los fascistas portugueses no podrían describirse de otro modo que en declaraciones en las que la consideración subjetiva y el peso del testimonio eran contradictorios, pero la revuelta interna, la negativa implícita o explícita a ser cómplice, el simple horror de sí mismo, adquirían un valor documental de gran importancia. Los testimonios que había podido recoger en Angola conducían a tres conclusiones principales que no podían pasar por alto las Naciones Unidas, ese tribunal supremo. Las conclusiones eran las siguientes: que en los Territorios portugueses se había entablado una guerra que era condenada por la generalidad de la nación portuguesa; que un régimen político inhumano y antinacional impedía a la nación portuguesa expresar esa reprobación; y que, en pleno siglo XX, el conjunto de Estados reunidos bajo la bandera de las Naciones Unidas no conseguía actuar con unanimidad para condenar el fascismo portugués y ponerle fin. Sin embargo, los procedimientos y objetivos de ese régimen político diferían sólo en magnitud de los del nazismo, que habían sumido al mundo en la guerra más mortífera que la humanidad hubiese padecido.

301. Pasando a hechos comprobados personalmente, declaró que, según un comunicado de la sección de información del Estado Mayor de la 2da. región aérea (Angola), el número de muertos angolanos y víctimas de las represiones militar, política y civil, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 1961, se situaba entre 50.000 y 80.000.

302. Añadió que durante el mismo período, las órdenes de misión emanadas del Mando de la 2a. región aérea preveían el ataque a las localidades de la zona sublevada, y su destrucción. Los ataques alcanzaron y destruyeron a casi todos los pueblos de dicha zona.

303. Desde finales de junio de 1961, las órdenes de misión previeron ataques a localidades disimuladas en la selva, y fueron ejecutadas metódica y regularmente en forma de "reconocimientos armados" (vuelos de patrulla sobre zonas definidas, con ataques a aldeas clandestinas descubiertas durante la misión) y de "ataques

localizados" (ataques de grupos de aviones a blancos del mismo tipo).

304. Al hablar del material utilizado y de su origen, indicó que en el Territorio había permanentemente bombarderos tácticos Lockheed "Harpoon" PV-2 reformados, procedentes de la dotación de la OTAN del año 1960 y vendidos a precio nominal al Gobierno portugués. Había también aviones-escuela North American "Harvard" T-6, adaptados al apoyo táctico; aviones de enlace Dornier DO-27, dotados de sistemas de lanzamiento de cohetes de 37 mm., y aviones de apoyo táctica Republic "Thunderjet" F-84, también recientemente reformados de la dotación de la OTAN y vendidos muy baratos al Gobierno portugués.

305. Para las misiones periódicas se empleaban aviones de patrulla de gran autonomía Lockheed "Neptune" P2V-5, que formaban parte de la dotación de la OTAN asignada a la 6a. base aérea, de Montijo, Portugal.

306. El armamento se componía de recipientes de napalm de origen sobre todo americano, y de bombas de gran potencia de 20, 100, 500 y 750 libras, algunas de ellas suministradas al principio por la OTAN, otras de fabricación local, y otras procedentes de la República de Sudáfrica. Las fuerzas aéreas portuguesas disponían, además, de bombas submarinas (que habían sustituido al napalm en los ataques a las localidades de la selva, por ser el único tipo de bomba eficaz en lugares de espesa vegetación), procedentes de la dotación de la OTAN y almacenadas en la 6a. base aérea (Montijo, Portugal).

307. Pasando a la cuestión de las alianzas, señaló que en febrero de 1962 se celebraron dos reuniones de trabajo entre el estado mayor de la 2a. región aérea y el Mando de la Royal Rhodesian Air Force; una de dichas reuniones se efectuó en Salisbury, y la otra en Luanda. Ambas produjeron intercambio de informaciones operacionales, planificación de los elementos comunes de coordinación, y el estudio de las modalidades de cooperación operacional, con la mira exclusiva de reprimir el nacionalismo en los dos Territorios.

308. Las consignas operacionales dadas por el Alto Mando al Mando de la 2a. región aérea durante el período del 16 de marzo al 30 de junio de 1961 fueron de aplastar todo indicio de rebelión, mediante el aniquilamiento de todos los angolanos que fuesen descubiertos en la zona sublevada.

309. Dijo, por último, que estaba dispuesto a proporcionar a los miembros del Comité Especial toda clase de datos suplementarios sobre los hechos que acababa de exponer y sobre cualquier otro punto referente a Angola entre el 21 de abril de 1961 y el 10 de febrero de 1963.

310. Al describir las armas empleadas, manifestó que nunca había visto de cerca la marca de esos cañones sin retroceso, pero suponía que eran de origen americano, y que, en general, las armas se fabricaban fuera de Portugal, ya que este país no contaba con medios técnicos para producir armamento en grandes cantidades. Sin embargo, en Luanda existía una pequeña fábrica de armas.

311. Todos los datos que podía aportar se referían al período que iba del mes de abril de 1961 al de febrero de 1963 y concernían a las actividades de la aviación militar. La consigna era atacar y destruir a todo

grupo de angolanos que se hallase fuera de las zonas dominadas por los portugueses. El arma utilizada solía ser el napalm; pero cuando la gente se refugiaba en la selva el procedimiento era ineficaz y entonces se reemplazaba con las bombas submarinas.

312. No sabía con exactitud cuáles eran las dotaciones de armas de la OTAN cedidas a Portugal. Algunos de esos aviones no tenían su base en Angola. Los portugueses habían recurrido a un subterfugio, que consistía en utilizarlos en rotación, como si se tratara de ejercicios. Cabía hacer la misma observación sobre la Guinea llamada Portuguesa en lo relativo a los aviones F-86, que también formaban parte de la dotación de la OTAN. Algunas bombas submarinas procedentes de la dotación de la OTAN habían sido suministradas por un país de la OTAN, pero no sabía cuál. Había observado, además, la presencia de aviones de patrulla de gran radio de acción Lockheed "Neptune" P2V-5, de fabricación americana. La propagación de la onda expansiva de las bombas submarinas era menor en tierra que en el mar. Pero este tipo de bomba provocaba hemorragias internas que acarreaban la muerte a toda persona que se hallara en un radio de 20 metros. Pero no se podía calcular el número de personas muertas en operaciones de bombardeo. Era imposible comprobarlo *in situ* ya que los nacionalistas se llevaban los cadáveres de todos los caídos, pero ese género de explosivo en un medio denso provocaba daños considerables.

313. En la primera reunión de oficiales de aviación, en Salisbury, el estado mayor de la Royal Air Force había intentado obtener datos sobre el tipo de armamento utilizado y sobre los medios de coordinación existentes.

314. A la reunión de Salisbury se aportaron unos cincuenta gráficos, y los oficiales encargados de los servicios de seguridad de las bases se informaron acerca del sistema de defensa de éstas, del tipo de armamento y de los menores detalles relativos al conjunto del sistema defensivo.

315. Mientras estuvo de servicio en Angola, había 12 bombarderos bimotores Lockheed "Harpoon" PV-2 en la base aérea y seis en Luanda; cuatro de ellos fueron enviados luego a Beira, en Mozambique. Además, había 12 ó 14 aviones Republic "Thunderjet" F-84 y unos 20 North American T-6, a más de aviones de patrulla de gran autonomía Lockheed "Neptune" P2V-5.

316. Después del 10 de febrero de 1963 nada había sabido respecto al grado en que los países de la OTAN habían entrenado oficiales del ejército portugués y pilotos para ejercicios de combate. Hasta esa fecha, algunos oficiales del ejército portugués se habían formado en los Estados Unidos, en el marco de un programa de cooperación de la OTAN. Sin embargo, creía que Portugal estaba en condiciones de formar a su propio personal de aviación con fines represivos. Había en Angola un número suficiente de portugueses que no necesitaban refuerzos del exterior. En cambio, Portugal recibía de sus aliados una ayuda financiera considerable, mucho más valiosa que una ayuda en hombres.

317. En cuanto a los ataques aéreos, dijo que su modalidad variaba según el tipo de armamento empleado. En el caso de ciertas bombas había una altura obligatoria de seguridad; para las bombas submarinas, la altura era algo menor; los ataques con ametralladora se efectuaban bastante bajos, y el lanzamiento de bom-

bas de napalm se hacía en vuelo rasante, a dos o tres metros sobre el obstáculo más alto.

318. Se habían efectuado bombardeos sin ninguna distinción, salvo en las zonas dominadas. Hasta el 30 de junio de 1961 el norte de Angola estaba enteramente dominado por las fuerzas nacionalistas, excepto varias aglomeraciones de poca importancia. Desde aquella fecha, los portugueses reforzaron con unos 50.000 hombres sus efectivos. Parte de la población se refugió en los bosques, y otras personas se rindieron a los portugueses. La zona no dominada por los nacionalistas era la selva. Pero los intensos bombardeos no habían afectado el ánimo de los combatientes de la libertad. Nada podía desanimar las fuerzas nacionalistas, que estaban dispuestas a llegar hasta el fin para conquistar la independencia su patria.

319. Al preguntársele si creía que, después del régimen de Salazar, habría en Portugal un régimen más liberal, sobre todo en lo relativo a cuestiones coloniales, y que ese régimen concedería a los Territorios portugueses el derecho de libre determinación, el peticionario respondió que ya existía en Portugal una oposición anticolonialista muy fuerte. Los millares de presos políticos que poblaban las cárceles de Salazar eran anticolonialistas, y había también movimientos clandestinos que actuaban contra el actual Gobierno.

320. Si el Gobierno de Salazar seguía recibiendo de sus aliados asistencia en todas las esferas, era posible que el aparato fascista en vigor siguiera manteniéndose. Si se suprimiese esa asistencia inmediatamente, el gobierno que sucediera al de Salazar adoptaría probablemente una actitud distinta. Añadió que le bastaban como pruebas el número de portugueses que emigraba cada día y la rebeldía de ciertos soldados que se negaban a partir para las operaciones, por no hablar de los muchos desertores que buscaban refugio en Francia, Bélgica y la República Federal de Alemania.

321. El Sr. de Padua, hablando como miembro de la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional, declaró que había sido subteniente médico del ejército portugués. Enviado a Angola hacia fines del mes de abril de 1961 desertó a fines de octubre de 1961. Era miembro del FPLN de Portugal donde, mucho antes de su partida para Angola, se había dedicado a actividades antifascistas. Su testimonio tenía por objeto presentar a los miembros del Comité Especial datos sobre los comienzos de la guerra en Angola y sobre la terrible represión de que eran víctimas los africanos en ese país.

322. Además, el peticionario había escrito una obra titulada *Guerra en Angola*, publicada en el Brasil en 1963 y traducida recientemente al ruso en la Unión Soviética. El libro tenía forma de diario y había sido escrito en su mayor parte en Angola para su publicación en el extranjero. En él podían hallarse ciertas conclusiones aparentes que, en realidad, eran de precisiones debidas a un mejor conocimiento de los hechos. Añadió que, dado el tiempo limitado que se le había concedido para hablar, no se detendría en la descripción de las torturas de que fuera testigo en la evolución de la guerra, ni en los sentimientos de los colonos y soldados. En cambio, deseaba presentar a los miembros del Comité una breve historia de los comienzos de la revolución en Angola, los cuales había presenciado.

323. En efecto, era muy importante saber cómo se había iniciado la guerra en Angola. En la Baixa do

Cassange, meseta donde se plantaba el algodón como monocultivo, los trabajadores se habían declarado en huelga: su salario era de unos 150 escudos por año, o sea alrededor de 30 nuevos francos. Cabía señalar que el poder adquisitivo de 150 escudos en Angola era superior al de 30 nuevos francos en París. Estas cifras permitían hacerse una idea de la miseria profunda de los trabajadores angolanos. Para responder a la huelga, los dirigentes fascistas y colonialistas habían hecho bombardear las aldeas con napalm. El 4 de febrero de 1961 los nacionalistas angolanos atacaron un cuartel de policía y una fortaleza militar en Ouanda. Los días siguientes, durante el entierro de policías y soldados muertos, los colonos, apoyados y aprobados por el ejército, se lanzaron contra los angolanos; según las estimaciones más moderadas, mataron a 3.000 de ellos.

324. Difícil era imaginarse el ambiente que reinaba entonces en Angola entre los colonos y las autoridades fascistas y colonialistas, particularmente después de las operaciones del 15 de marzo en el norte de Angola. Dicho ambiente se caracterizaba por una locura homicida, una falta total de respeto por la vida y los derechos más elementales del pueblo africano. Cuando el peticionario fue enviado al norte, en plena zona de operaciones militares, pudo comprobar la importancia y el carácter sistemático de las devastaciones ordenadas. Así, el mando de su unidad había recibido la orden, al entrar en la región sublevada, de "matar a todo ser viviente, incluidos los animales". El peticionario vio aldeas bombardeadas o mejor dicho arrasadas con el napalm después de haber sido saqueadas. Vio las cabezas cortadas de angolanos que los colonos agitaban furiosamente en la punta de lanzas; vio y oyó cosas capaces de quitar el sueño a cualquier hombre normal en todo el mundo. El orador remitió a su obra a los miembros del Comité Especial que quisieran documentarse sobre esos hechos. Sin embargo, quería poner de relieve la ayuda prestada por el ejército a sus cómplices los colonos.

325. El ejército colonialista era netamente racista, a pesar de todas las declaraciones de los llamados "multirracialistas". Como prueba, bastaba oír los discursos dirigidos a los soldados portugueses en los buques de transporte del ejército que los llevaban a Angola. Se justificaba la lucha contra los angolanos con el pretexto de evitar la pérdida de los beneficios detenidos del Territorio sin hablar de las afirmaciones encaminadas a crear en ellos un complejo de superioridad.

326. Por otra parte, el armamento de los paracaidistas y tropas especiales que el peticionario había visto con sus propios ojos era parte del armamento de la división portuguesa de la OTAN. Las bombas de napalm procedían en parte de Sudáfrica, por conducto de la OTAN. Según algunos oficiales superiores — y Manuel Alegre podía confirmar esa afirmación — Israel, que en este caso actuaba como intermediario entre la República Federal de Alemania y los portugueses, les había suministrado ametralladoras USI. En los campamentos de las unidades combatientes se habían encontrado fragmentos de bombas que llevaban inscripciones en inglés. Un régimen colonialista y fascista, capaz de recurrir a estos procedimientos con un manifiesto espíritu de genocidio, nunca volvería por sí solo a la razón, ni iniciaría seriamente un proceso de descolonización. Por consiguiente, había que tomar medidas extremadamente enérgicas, lo único que podría obligar al Gobierno portugués a abandonar los Territorios que ocupaba.

327. A continuación, refiriéndose al caso del pueblo portugués, señaló que con demasiada frecuencia se olvidaba que el régimen de Portugal era un régimen fascista particularmente feroz que encarcelaba a los portugueses por millares, que ese régimen no concedía siquiera a los portugueses el derecho de elegir libre y democráticamente sus representantes, y que no se preguntaba a los jóvenes portugueses si querían o no hacer la guerra. El Comité sabía que la mayoría de los soldados portugueses no demostraban gran entusiasmo ante la idea de hacerse matar en África para defender los intereses de los monopolios portugueses o extranjeros. El pueblo portugués lo había demostrado reiteradamente. Millares de desertores del ejército de Portugal habían tenido que abandonar su país. En conclusión, no parecía que se pudiera poner en duda el hecho de que el Gobierno portugués traicionaba al pueblo y constituía una amenaza creciente para la humanidad entera. El peticionario insistió en que él no era el único desertor del ejército portugués, ni mucho menos. En el propio Argel, otros desertores o militares rebeldes contra el fascismo gozaban de la generosísima acogida de la Argelia revolucionaria. Entre ellos figuraba su colega, Manuel Alegre, que haría uso de la palabra para informar a los miembros del Comité sobre la situación en que vivían los patriotas angolanos y portugueses detenidos en las cárceles de Angola hacia finales de 1963.

328. El Sr. Manuel Alegre, hablando como miembro de la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional, manifestó que la guerra colonial nacía de la opresión fascista de Portugal. Los bombardeos con napalm, la matanza de mujeres, niños y ancianos, los campos de concentración, las torturas y todas las atrocidades cometidas en Angola, en Mozambique y en la Guinea llamada portuguesa eran el corolario de las torturas y de los asesinatos políticos cometidos a diario por las fuerzas represivas del régimen de Salazar en Portugal. Todo lo que sucedía en Angola no era sino la prolongación, en un país colonizado, de las actividades del régimen fascista que oprimía al pueblo portugués desde hacía cuarenta años.

329. Declaró que era estudiante de Derecho en la Universidad de Coimbra cuando fue incorporado al ejército fascista en 1961. Antes de esta fecha había participado en la lucha de los estudiantes para conquistar la libertad de asociación y había militado en las organizaciones democráticas clandestinas que combatían contra el poder fascista de Portugal. Llegó a Angola el 19 de julio de 1962. Todo lo que había podido comprobar confirmó su convencimiento de que la guerra colonial era un crimen no sólo contra los pueblos de las colonias sino también contra el pueblo de Portugal.

330. Dos días después de su llegada un colono nacido en Angola le contó cómo había violado con su puñal a una joven angolana. En el comedor de los oficiales del regimiento de infantería de Luanda oía a menudo a los criminales de guerra vanagloriarse de sus hazañas. El subteniente Machado Querido, por ejemplo, empleaba un método especial para interrogar a los presos; les hundía muy lentamente el puñal en la cabeza. El subteniente Linhares hacía lo que llamaba cultura política tratando de cortar de un solo golpe la cabeza de los presos. El peticionario también había visto al teniente Mendonça pasearse en las calles de Luanda con un cinturón adornado de orejas humanas. Todo eso era un símbolo odioso de una horrenda guerra. En la ruta de Luanda a Nambuangongo todas las aldeas por las

que había pasado el peticionario estaban destruidas. Sólo vio allí soldados portugueses. Los angolanos estaban muertos. En Nambuangongo un capitán portugués le había explicado que era necesario recurrir a la guerra química, por considerar que era la única solución eficaz. Algunos días más tarde los soldados bajo el mando del mismo capitán se negaron a seguir luchando. Para obligarlos a obedecer, el capitán no encontró otro medio que matar a uno de ellos. Entonces las tropas se rebelaron. La PIDE acusó a Manuel Alegre de haber sido el cabecilla de la rebelión, lo cual no era cierto. Los soldados que se rebelaron lo hicieron para expresar violentamente su descontento y su desesperación.

331. En aquella época el peticionario trabajaba con su comandante y otros camaradas en la organización de una rebelión militar para derrocar el poder fascista en Angola. Había logrado reunir a muchos de sus camaradas y crear una junta militar revolucionaria para coordinar la acción de todos los grupos clandestinos en el seno mismo de las fuerzas armadas. Holgaba decir que esa junta militar se había constituido con la participación de algunos oficiales superiores. Por desgracia, se habían cometido algunas imprudencias y el comandante y varios otros oficiales habían sido enviados de vuelta a Portugal donde se les había expulsado del ejército. Luego habían sido arrestados por la PIDE.

332. Añadió que el 17 de abril de 1963 se le arrestó en Luanda, con desprecio total de todas las leyes civiles y militares. Las autoridades militares fascistas lo licenciaron y lo entregaron en la PIDE en Luanda misma. Fue encarcelado en la Fortaleza de São Paulo, donde se le sometió durante 15 días y 15 noches a interrogatorios ininterrumpidos. Pasó dos meses y medio solo en una celda. Con todo, consideraba que su situación era relativamente privilegiada. En efecto, en la Fortaleza de São Paulo se encontraban otros prisioneros que no eran ni blancos ni portugueses y a quienes se trataba como animales. Desde su celda el peticionario oía día y noche los gritos de los presos torturados. Los que los torturaban ni siquiera trataban de ocultarse: para ellos, los detenidos angolanos no eran hombres. No se daban cuenta de que un día el peticionario contaría al mundo todo lo que había podido ver en el infierno vivo de la Fortaleza de São Paulo. Para los agentes de la PIDE nada era más normal que torturar a un angolano. Así era como, paseándose un día en el patio de la cárcel, el peticionario había visto a un hombre desnudo echado por tierra, con los pies y manos atadas, a quien los agentes de la PIDE quemaban con cigarrillos. Riéndose, le preguntaron si quería participar en su distracción. El les contestó que la única participación que él podía imaginar era la de reemplazar a su camarada angolano.

333. En celdas vecinas a la suya se encontraban detenidos tres escritores angolanos: Luandino Vieira, António Jacinto y António Cardoso, quienes estaban completamente aislados de los demás presos. Habían sido también torturados y esperaban desde hacía 29 meses su juicio. Un día hicieron pasar al peticionario el mensaje siguiente: "¡Valor, camarada! ¡Nuestra lucha es común, nuestros pueblos vencerán! ¡Viva Portugal libre! ¡Viva Angola libre!" Esa carta era la prueba concreta de la solidaridad de los demócratas portugueses y de los patriotas angolanos que luchaban por la misma causa.

334. Luandino Vieira, António Jacinto y António Cardoso habían sido condenados a 14 años de cárcel

y estaban cumpliendo su pena en el campo de concentración de Tarrafal, en las Islas del Cabo Verde.

335. Según admitiera el propio Director de la cárcel, en 1963 había cerca de 2.000 presos angolanos en los calabozos de la Administración de Luanda. Después de ser torturados, a esos presos se les enviaba, sin previo juicio, a los campos de concentración del sur de Angola. En 1963 se llevó al peticionario de vuelta a Portugal, donde fue confinado en Coimbra. Cinco meses más tarde partía clandestinamente de Portugal para evitar que lo detuvieran nuevamente y lo deportaran a Angola, donde habría tenido que comparecer ante un tribunal militar.

336. Antes de concluir, el peticionario insistió en que los verdaderos representantes de su patria no eran los delegados de Salazar, que no representaban sino los consejos de la administración de ciertos monopolios. Los verdaderos representantes de su país estaban en Portugal en las cárceles políticas, donde los torturaban los verdugos de la policía de Salazar. Eran los portugueses y las portuguesas que luchaban por la libertad, los desertores, los millares de emigrados que vivían en todos los países del mundo salvo en Angola, en Mozambique, en la Guinea llamada Portuguesa.

337. Mal podría un régimen que jamás había respetado los derechos más elementales de su pueblo, respetar el derecho a la independencia de los pueblos colonizados. La opresión de los pueblos de Angola, de Mozambique y de la Guinea llamada Portuguesa nacía de la opresión del propio pueblo de Portugal. Los hombres que torturaban en las colonias portuguesas eran los mismos que torturaban en Portugal, y por eso los aliados naturales de la lucha del pueblo portugués por la libertad eran los pueblos hermanos de Angola, de Mozambique y de la Guinea llamada Portuguesa. El pueblo de Portugal no podría ser libre mientras no lo fueran los pueblos de las colonias. El combate emprendido por la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN) contra la guerra colonial no debía considerarse sólo como una muestra de solidaridad sino también de patriotismo. Al luchar por el reconocimiento del derecho a la independencia de los pueblos colonizados, el FPLN luchaba al mismo tiempo por la independencia nacional de su patria.

338. Por mayoría aplastante el pueblo portugués se oponía a la guerra colonial. Este sentimiento se reflejaba en el gran número de desertiones, en las manifestaciones, en las estaciones y en los centros de enseñanza, en el hecho de que millares de obreros se negaban a entregar una parte de sus sueldos para contribuir a sus gastos militares, en las declaraciones políticas de los representantes de la oposición, en cuyas filas había desde católicos hasta comunistas. El 1º de mayo de 1962, en las calles de Lisboa 100.000 personas, enfrentándose valientemente con las fuerzas de la policía, habían gritado: "¡Paz en Angola!"

339. El Gobierno fascista había disuelto la Asociación de Escritores Portugueses porque había concedido el más alto premio literario de Portugal a Luandino Vieira. Los miembros del comité directivo de esta prestigiosa institución habían sido detenidos y acusados de haber traicionado su patria. Pero, cabía preguntar si los traidores eran los que luchaban por la libertad y la dignidad del hombre o los que desde hacía mucho pisoteaban todos los días esa libertad y esa dignidad en Angola, en Mozambique, en la Guinea llamada portuguesa y en el propio Portugal.

340. Los que prestaban su ayuda a Salazar para que se mantuviera en el poder no debían olvidar que eran cómplices de un régimen ilegal, condenado por la historia, y que un día el pueblo portugués y los pueblos de las colonias podrían distinguir entre los amigos de Salazar y quienes habían luchado con la organización Frente Patriótica de Libertação Nacional en favor de su libertad.

341. Uno de los peticionarios reiteró, en respuesta a una pregunta, que en la época en que desertó, en 1961, había visto metralletas que, según un coronel de su unidad, eran de fabricación israelí. Parecía que en ese caso Israel había servido de intermediario a la República Federal de Alemania.

342. El Sr. Eduardo, hablando en nombre del Gobierno Revolucionario de Angola en el Exilio (GRAE), declaró que desde 1961 el problema angolano ocupaba muy particularmente la atención de las Naciones Unidas y figuraba entre los problemas incluidos de manera casi permanente en el programa de los períodos de sesiones de la Organización. Como los antecedentes históricos habían sido expuestos en varias ocasiones en particular por los peticionarios del Movimiento — en vísperas de iniciarse la insurrección armada de campesinos y de trabajadores angolanos e inmediatamente después — ante los diversos organismos de las Naciones Unidas, el peticionario se limitaría a poner de relieve la sistemática negativa de los colonialistas portugueses a acatar las recomendaciones de las Naciones Unidas.

343. En efecto, los colonialistas, burlando todas las recomendaciones de la Organización relativas a la concesión de la independencia a los países bajo su dominación colonial, continuaban las matanzas, en particular en Angola, en donde continuamente se arrasaban e incendiaban las aldeas, y se asesinaba a ancianos, mujeres y niños. Eso explicaba el éxodo cada día mayor de angolanos hacia la República Democrática del Congo, como se indicaba en un reciente informe del Secretario General, en el cual se señalaba que, desde el comienzo de la guerra en Angola, el número de refugiados angolanos en la República Democrática del Congo pasaba de 220.000 y que, tan sólo en 1965, habían llegado 20.000 refugiados al Congo. Sin embargo, la cifra de 600.000 refugiados angolanos, dada por el Gobierno de la República Democrática del Congo, estaba mucho más cerca de la realidad.

344. No contentos con sus tremendos bombardeos con napalm, que causaban daños indecibles entre gente inocente, desde el mes de mayo de 1965 — como lo denunciara la Agencia Angolana de Prensa e Información el 8 de junio de 1965 — los colonialistas habían empleado de vez en cuando gases tóxicos, que causaban gran mortandad.

345. Los refugiados angolanos que sin cesar llegaban a la República Democrática del Congo llevaban en su propia carne las señales de las atrocidades cometidas por el ejército "cristiano" de Salazar, y era lamentable que el Comité Especial no hubiese podido apreciar sobre el terreno la profundidad del dolor y el sufrimiento que abrumaba al grupo más numeroso y sufriendo de refugiados que existía en África, por no decir en el mundo. Sin embargo, el peticionario esperaba que las Naciones Unidas no se limitarían a registrar el movimiento de refugiados angolanos hacia la República Democrática del Congo, y que en breve se daría a esos centenares de miles de seres humanos la ayuda y

el sostén material verdaderos y eficaces de la Organización.

346. Desmintió categóricamente las afirmaciones de los funcionarios portugueses según las cuales la situación en Angola era "normal", pues una situación "normal" no justificaba el envío incesante de refuerzos militares, la matanza del pueblo, los comunicados semanales y periódicos del estado mayor del ejército colonialista portugués sobre la guerra en Angola, ni la condecoración, por sus crímenes — llamados "heroísmo" —, de los soldados portugueses que se destacaban tristemente matando a hombres indefensos.

347. En efecto, según el diario reaccionario portugués *O Primeiro de Janeiro*, de 7 de mayo último, el Ministro de las Fuerzas Armadas portugués había condecorado a los siguientes soldados: António Júlio Salgueiro Gonçalves, José Francisco de Oliveira, António Coelho da Silva, Jorge Cláudio Cabrita, João Manuel de Carvalho Margarido, Desidério Trindade Vilas — para no citar sino a éstos — por "servicios prestados a la nación (portuguesa) en defensa de su integridad territorial". Por su parte, en un discurso pronunciado en Braga el 28 de mayo último, con ocasión del cuadragésimo aniversario de lo que los portugueses llaman "revolución nacional", Salazar había reafirmado lo siguiente: "No tengo intención de dejar el poder pues tal decisión se interpretaría como un abandono de la política seguida hasta ahora por Portugal para defender su integridad territorial". Había añadido: "Tal decisión podría poner en peligro la posición que Portugal ha podido establecer en ultramar gracias al combate que libran miles de héroes anónimos".

348. Esos gestos y declaraciones no requerían comentario.

349. Bastaba decir que con ese estímulo, los soldados portugueses acentuaban su salvajismo, puesto que ya sabían que serían condecorados según el número de cabezas de negros que hubiesen coleccionado en "defensa de la patria portuguesa". Nunca se sabría con exactitud la cantidad de cabezas de negros que enviaban cada semana los soldados portugueses a sus padres y amigos residentes en Portugal. El Ejército de liberación nacional de Angola se había apoderado de centenares de cartas de soldados portugueses en que se mencionaba este tráfico macabro, que a menudo se hacía por vía oficial, o sea por correo ordinario. El GRAE pondría algunas muestras a disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su próximo período de sesiones.

350. No era posible contar las ejecuciones sumarias cometidas a sangre fría. El 18 de noviembre la Agencia Angolana de Prensa e Información había denunciado la odiosa ejecución por paracaidistas portugueses, el 15 de noviembre de 1965, en el estadio de la villa de Carmona, Uíge, de unos 30 patriotas angolanos, detenidos al terminar los violentos combates ocurridos entre fuerzas de resistencia angolana y tropas portuguesas. Entre las víctimas de esta barbarie se encontraban Ambrósio H. Dinganga, Carlos Pinto Abreu, Simão B. de Vasco, Júlio Ginga, Silva Luhando, Dionísio de Vicente y Formosinha Artur, una joven de 18 años.

351. Por otra parte, nadie sabía exactamente cuántos angolanos padecían y morían en las innumerables prisiones colonialistas. El peticionario no quería citar nombres porque para él los nombres carecían de importancia. No podía haber distinción alguna entre todos

esos heroicos hermanos que sufrían en las cárceles de Salazar por haber reclamado su derecho a la libertad. Lo que afirmaba con toda energía era la necesidad imperiosa de liberar a todos esos hermanos, fueren uno o diez, mil o diez mil. No imploraba esta liberación, puesto que sabía que los colonialistas no podrían oponerse a ella indefinidamente; la lucha que libraban los combatientes por la libertad tendría como consecuencia ineludible la liberación de sus hermanos en una fecha no muy lejana. En cambio, el orador no había cesado nunca de denunciar los cobardes asesinatos y los suplicios de que eran víctimas esos prisioneros políticos y de guerra a manos de los colonialistas portugueses.

352. Sin dejar de confiar en la Organización, y al mismo tiempo que expresaba su profunda gratitud por todas las iniciativas tomadas por los países hermanos del tercer mundo y todos los demás países amigos en favor del derecho del pueblo angolano a la libre determinación, el GRAE continuaría con decisión inquebrantable la lucha armada, mientras ésta le fuera impuesta por los dirigentes de Lisboa. Como movimiento de las masas explotadas de Angola y garante de la unidad de acción en la lucha armada, el Frente Nacional de Liberación de Angola — del cual había surgido el GRAE — pensaba liquidar el pasado colonial y emprender el camino hacia un porvenir auténticamente nacional. El pueblo angolano combatiría hasta el fin, es decir, hasta la eliminación total del colonialismo y sus vestigios.

353. Por intermedio de su organización de lucha, el pueblo angolano decía “no” a las maniobras portuguesas para introducir engañosas “reformas” sociales y económicas en Angola, tales como la abolición ficticia de la categoría de “indígena” — lo que equivaldría a hacer efectiva la integración de Angola con Portugal —, el “aumento” de salario de los negros, la falsa abolición de los trabajos forzados, la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, la incorporación de los negros, títeres del colonialismo, a ciertos organismos administrativos.

354. Todas esas maniobras puramente superficiales no engañaban sino a sus propios autores: los colonialistas portugueses. Las masas angolanas no luchaban para “reformular” el colonialismo ni para sentarse, de manera simbólica, junto con sus torturadores en instituciones que tenían por fin su propio esclavizamiento. El pueblo angolano sabía que el colonialismo no se “reforma” ni se mejora. El pueblo no caería nunca en ese absurdo, en esa trampa. Las masas angolanas luchaban por la libertad de todos los angolanos, pues esa libertad no les sería reconocida bajo ninguna administración colonial, fuese clásica o reformada. La reforma a la que aspiraban los angolanos consistía en la libre determinación y entrañaba la devolución de las tierras angolanas a los angolanos. Nadie ignoraba que esa reforma no era posible bajo el régimen colonial.

355. Los colonialistas portugueses calificaban de “legítimo” el empleo de gases tóxicos, el asesinato sistemático de gentes inocentes porque según decían esas medidas formaban parte de su política de defensa de sus “derechos históricos”. El GRAE había tomado las armas el 15 de marzo de 1961 para reivindicar su derecho a la vida, pues sólo debía reconocerse en Angola el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la libre disposición de los propios destinos. La injusticia no podía ser legítima; lo legítimo era la negativa de un pueblo a dejarse exterminar, la negativa de un pueblo a seguir viviendo en la esclavitud; lo legítimo, en una palabra,

era su resistencia al agresor. En eso consistía la legitimidad del combate.

356. Dijo que aprovechaba la oportunidad para denunciar la ayuda que el imperialismo concedía a Portugal en su guerra colonial. Todos los días la horda de asesinos de Salazar exterminaba salvajemente decenas de angolanos inocentes con las ametralladoras y los dólares de los Estados Unidos, los bombarderos y los tanques franceses y alemanes, los fusiles belgas y el apoyo material y político de varios otros países de la OTAN. La experiencia de cinco años de resistencia demostraba que sin la ayuda de esos países el colonialismo portugués ya habría sucumbido desde hacía tiempo bajo los golpes de los angolanos que luchaban por su libertad.

357. Denunció con la misma energía la alianza racista entre Salazar, Verwoerd y Ian Smith, alianza que suponía una gran amenaza para la paz en Africa y un gran peligro para millones de seres humanos. Era imposible, en la actualidad, separar el problema de Rhodesia del Sur, de Mozambique y de Sudáfrica pues sólo una acción concertada sobre esos tres países en bloque, y no por separado, decidiría el final de la lucha contra el racismo y el colonialismo en el sur del continente africano.

358. En un discurso pronunciado el 11 de mayo de 1966 ante la Sociedade Histórica de Independência de Portugal, Abel de Abreu Sotto-Mayor, Presidente de dicha sociedad, después de rendir homenaje “al valor del soldado portugués, a sus altas cualidades raciales — superiores a las de cualquier otro pueblo —, a su valentía y disciplina”, había dicho: “nuestros soldados no luchan solamente por Portugal; luchan también por Occidente ... pues Portugal es hoy en Africa uno de los últimos bastiones de la libertad y la civilización occidentales. Constituimos, junto con Sudáfrica y Rhodesia, un bloque de resistencia ante las ambiciones rusas y chinas en Africa ...” (diario portugués *O Primeiro de Janeiro* de 12 de mayo de 1966).

359. Como podía verse, para los colonialistas portugueses el derecho de los pueblos era una ficción jurídica o más bien un pasaporte para el comunismo.

360. Las Naciones Unidas debían utilizar su autoridad moral para hacer que Portugal entrara en razón, si no querían contradecirse a sí mismas. Por ello era preciso que se mostrasen más firmes en 1966. Portugal no debería continuar burlándose de las recomendaciones de la Organización y de la reprobación casi universal que provocaba su política.

361. A continuación reafirmó su categórica oposición al envío a Angola — solicitado por el Gobierno de Portugal — de una comisión de las Naciones Unidas encargada de “apreciar” lo que los colonialistas llamaban “la obra grandiosa” realizada por Portugal durante cinco siglos. El orador sabía, como todo el mundo, que una visita guiada de ese tipo no permitiría a dicha comisión ver lo que realmente debería verse: la miseria de la gente, sus aspiraciones, las regiones donde continuamente llovían las bombas de napalm, las aldeas arrasadas, los campos de concentración, los presos políticos y los prisioneros de guerra y las fosas comunes donde se amontonaban los huesos de centenares y miles de angolanos, asesinados por soldados que luego recibían orgullosamente condecoraciones de manos de Salazar.

362. El GRAE estimaba que la opinión internacional no tenía necesidad de que se enviara una comisión

a Angola para saber que los angolanos no gozaban de las libertades fundamentales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Audiencia de peticionarios en relación con Mozambique

363. El Sr. Mondlane, hablando en nombre del Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), dijo que la población de Mozambique acogía gustosamente la oportunidad de dirigirse de nuevo al Comité Especial, y agradecía al Gobierno de Tanzania el haber invitado al Comité a reunirse de nuevo en Dar es Salaam, demostrando con ello al mundo entero su determinación de luchar por la total eliminación del colonialismo y el imperialismo en África.

364. El FRELIMO consideraba al Comité Especial como un importante vehículo para hacer llegar la opinión de los pueblos del África no independizada a las Naciones Unidas. En consecuencia, tenía gran interés en presentar toda la información que pudiera resultar útil con miras a la elaboración de las resoluciones que tendrían que aprobar las Naciones Unidas antes de poder tomar las medidas necesarias para obligar a Portugal a poner fin a sus criminales actividades en África.

365. El orador recordó que en junio de 1965 se había informado a los representantes de las Naciones Unidas de la situación, los problemas y las necesidades del FRELIMO. Ya se habían explicado las razones para iniciar una lucha armada contra el ejército y la policía portuguesas en Mozambique y se habían señalado las privaciones que sufría la población de Mozambique bajo el régimen implacable de Salazar. También se había informado al Comité Especial de las dificultades con que tropezaba la población africana de Mozambique y del hecho de que las autoridades portuguesas obligaban a centenares de miles de trabajadores de Mozambique a buscar empleo en los Estados racistas vecinos, Sudáfrica y Rhodesia, lo que les obligaba a dejar solos a sus mujeres e hijos para ir a ganar un salario mínimo de subsistencia trabajando para los colonos blancos y los intereses económicos internacionales, que sacaban beneficios enormes. El Comité se había enterado de que todos los meses se obligaba a miles de hombres y mujeres de Mozambique — que el Gobierno portugués denominaba cínicamente “contratados” — a realizar trabajos forzados para los colonos europeos y asiáticos en casas particulares, fábricas, ferrocarriles y puertos, así como en granjas y plantaciones. Se había mencionado lo que algunos observadores extranjeros del colonialismo portugués denominaban la “moderna esclavitud”, en virtud de la cual el Gobierno portugués, en connivencia con las compañías concesionarias, obligaba a los campesinos africanos a producir algodón, arroz, maní y otras cosechas comerciales y a venderlas finalmente a dichas compañías a un precio muy inferior al costo de producción. Como consecuencia de estas prácticas, centenares de miles de trabajadores de Mozambique habían tenido que buscar empleo en los países vecinos. Añadió que los representantes recordarían las audiencias concedidas a dos ancianos indígenas — uno de ellos un campesino y el otro un maestro de escuela y especialista en transmisiones de radio —, quienes habían presentado pruebas extraídas de sus propias experiencias personales en apoyo de estas acusaciones contra el colonialismo portugués. Finalmente, se había informado al Comité de las medidas que la población de Mozambique había tenido que tomar para corregir esta situación: había tenido que formar un movimiento úni-

co de liberación nacional, el Frente de Libertação de Moçambique, o FRELIMO, y se había comprometido a conseguir que se hiciera justicia.

366. Esto ocurría en junio de 1964. En aquella fecha la población africana de Mozambique creía todavía, por equivocada que estuviese, que las Naciones Unidas, a través de su régimen de Administración Fiduciaria, conseguirían la emancipación definitiva de los pueblos coloniales por vía pacífica. Pero desde entonces habían aprendido una amarga lección. Después de enviar a sus representantes a todos los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para presentar sus puntos de vista, sin obtener más que vagas resoluciones, decidieron emprender una acción directa. Así, en septiembre de 1964 se inició en Mozambique una insurrección armada contra el colonialismo portugués.

367. Desde diciembre de 1965, fecha en que se presentara a las Naciones Unidas la información sobre las atrocidades cometidas por los portugueses contra la población de Mozambique, se había extendido la lucha armada del frente de liberación. El número de combatientes de la libertad adiestrados y armados había aumentado, de unos centenares, a unos miles. Esos combatientes habían conseguido obligar al ejército y policía portugueses a adoptar una posición defensiva, al menos en las dos quintas partes del territorio, y la población de Mozambique podía jactarse hoy día de zonas semiliberadas que abarcaban una quinta parte del país. En esas zonas, los habitantes podían, por vez primera en más de 70 años, y en algunos casos en más de 100 años, ocuparse en sus propios asuntos sin verse acosados por la policía y la administración portuguesas. Así, a pesar de los frecuentes ataques de la fuerza aérea portuguesa, la población organizaba sus propias escuelas, clínicas, tribunales y, cuando era posible, incluso la comercialización de sus productos agrícolas. Desgraciadamente, los que no podían proteger debidamente con fuerza militar sus cosechas y ganados se habían visto obligados a emigrar a zonas más difíciles del país, y algunos habían tenido que emigrar incluso a los Estados africanos vecinos independientes, tales como Tanzania, Zambia y Malawi, en decenas de millares, lo que les había obligado a recabar asistencia humanitaria internacional, como recordarían los representantes por los informes anuales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

368. Desde luego, los portugueses no se hallaban solos en su empeño por mantener la supremacía blanca en el África meridional: contaban con el apoyo de las repúblicas controladas por los colonos de Sudáfrica y de Rhodesia que, unidos al régimen fascista de Salazar en Portugal, habían formado una alianza racista dispuesta a mantener a los blancos en el poder. A fines de 1965 se había firmado un acuerdo entre Portugal y Sudáfrica, según se dijo, para asentar a varios miles de campesinos blancos sudafricanos en la provincia de Tete, en Mozambique. Dicha información fue descrita en los periódicos de Sudáfrica y Portugal como una medida para contribuir a aliviar la presión demográfica en Sudáfrica enviando campesinos blancos a Mozambique. Sin embargo, se había descubierto que la verdadera intención de ambos Gobiernos era ocultar un plan mucho más siniestro, consistente en facilitar al ejército portugués mercenarios blancos sudafricanos que les ayudasen a acabar con el movimiento de liberación de Mozambique. Se señaló a la atención del Comité esta

situación, ya que, a juicio del FRELIMO, se trataba de una violación del derecho internacional y constituía una injerencia en los asuntos internos de Mozambique.

369. A este respecto tal vez le interesara al Comité saber que, según una declaración de la BBC a fines de la semana anterior, el Sr. Ian Smith se jactaba de la estrecha cooperación existente entre los tres Gobiernos racistas de la alianza: Portugal, Sudáfrica y Rhodesia. Según ese informe, el Sr. Ian Smith había dado las gracias en particular al Gobierno portugués por seguir facilitando medios de transporte y otros servicios a Rhodesia en un esfuerzo para frustrar cualquier efecto que pudiera tener el llamado bloqueo del petróleo impuesto por el Gobierno del Reino Unido. Desde luego, era evidente que en las actuales circunstancias el frente de liberación de Mozambique no tenía otro recurso que adoptar las medidas necesarias no sólo para destruir a los colonialistas portugueses dentro de su propio territorio sino también para cooperar por todos los medios a su alcance en la lucha del pueblo de Zimbabue y de Sudáfrica por la liberación nacional.

370. Volviendo a referirse al papel que representaban algunas Potencias de Europa occidental y América del Norte, que al tiempo eran miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), en la cuestión del colonialismo, declaró que so pretexto de participar en una alianza para la defensa de la democracia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, Francia, la República Federal de Alemania y algunas otras Potencias facilitaban a Portugal armas sumamente mortíferas, y adiestraban a sus soldados en las técnicas de la guerra contra las guerrillas. Cuando se presentaban argumentos convincentes en contra de esta alianza antidemocrática con un régimen fascista como el de Salazar en Portugal, se solía responder que existía una cláusula en el Acuerdo de la OTAN por la que se estipulaba, entre otras cosas, que las armas adquiridas a través del Acuerdo de la OTAN no se utilizarían para mantener a una Potencia colonial en ninguna parte del África al sur del Trópico de Cáncer. Sin embargo, en dicho Acuerdo no se decía nada en relación con el despliegue en las colonias de África de personal militar adiestrado o mantenido bajo los auspicios de la OTAN; tampoco se hablaba de prohibir a las Potencias de la OTAN que cedieran o vendieran sus propias armas a Portugal al margen del Acuerdo de la OTAN; ni de excluir abiertamente a un Estado que mantuviera una actitud fascista en relación con la libre determinación, la autonomía y la independencia, como en el caso de Portugal. La población de Mozambique se preguntaba a menudo, en vista de esta situación, qué clase de democracia pretendían defender las Potencias occidentales. Al no obtener una respuesta satisfactoria, la población no podía menos que concluir que los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la República Federal de Alemania y sus aliados de la OTAN conocían y aceptaban la actitud antidemocrática de Portugal en sus colonias, y deseaban a sabiendas prestar su apoyo para que continuara el colonialismo en África.

371. Finalmente, teniendo en cuenta que esas mismas Potencias, salvo la República Federal de Alemania, eran Miembros de las Naciones Unidas y que, por consiguiente, habían aceptado los principios que regían el órgano mundial, el cual propugnaba la emancipación completa de todos los pueblos sometidos al colonialismo, el frente de liberación de Mozambique hacía un llama-

mamiento a dichas Potencias para que examinaran su actitud en relación con su aliado, Portugal. Aunque nada haría desistir a la población de Mozambique de continuar la lucha hasta su total liberación, quería hacer un llamamiento a las Naciones Unidas para que trataran de encontrar una fórmula que obligara a estas Potencias de la OTAN a retirar su apoyo a Portugal.

372. El Sr. dos Santos, hablando en nombre de FRELIMO, describió el desarrollo de la lucha por la liberación nacional en Mozambique en los seis últimos meses.

373. Dijo que la lucha por la liberación nacional se agrandaba, y que las regiones controladas por el FRELIMO ganaban extensión e importancia. Una gran parte de las provincias de Cabo Delgado, Nyassa, Zambézia y Tete escapaba al control portugués. En las dos primeras provincias, la mayor parte de la población vivía bajo el control de los guerrilleros del FRELIMO. En las provincias de Zambézia y Tete, las zonas sometidas a la autoridad del FRELIMO eran menos importantes. En esas zonas semiliberadas el FRELIMO proseguía una actividad de reconstrucción; había intensificado la producción agrícola y establecido hospitales en los que se cuidaba a los combatientes y a la población civil. La campaña de alfabetización progresaba satisfactoriamente.

374. Se había combatido en forma intensa, sobre todo en las regiones de Mueda, Diaca, Muidumbe, Chai, Macomia, Muembe, Valadim, Catur, Nova Freixo, Marrupa y Masangulo. Durante estos encuentros, las tropas portuguesas habían sufrido graves pérdidas: varios centenares de soldados portugueses habían resultado muertos o heridos en tanto que los guerrilleros se habían apoderado de gran número de armas, metralletas, fusiles, granadas ofensivas y defensivas, minas, vehículos automóviles y otro material militar. Se había derribado un avión y un helicóptero, los puentes y las vías férreas habían sido saboteados y varios caminos habían sido destruidos. Además, muchos soldados africanos habían desertado para incorporarse a las filas del FRELIMO.

375. La represión de las fuerzas portuguesas había obligado a varios millares de personas a buscar refugio en Tanzania, Malawi y Zambia, y su situación seguía siendo difícil, en particular en Malawi, donde les faltaba todo o casi todo.

376. Añadió que, enfrentado con la lucha popular, el colonialismo portugués reaccionaba como una bestia herida. El ejército y la PIDE — es decir la policía política — trabajaban en estrecha cooperación, en particular durante las operaciones militares. Las tropas portuguesas recibían instrucciones precisas y formales: tenían orden de asesinar a los habitantes de las aldeas o internarlos a la fuerza en campos de concentración establecidos al efecto junto a los puestos militares y administrativos. Los soldados incendiaban sistemáticamente las casas de los campesinos y robaban o destruían sus cosechas y ganado.

377. En el pasado mes de enero, el Régulo — o jefe tradicional — de Maniamba había sido detenido por habersele encontrado encima una tarjeta de miembro del FRELIMO. Los soldados lo enterraron vivo hasta el cuello. Interrogado, se negó a hablar. Al cabo de dos días decidió hablar, para declarar: "Sí, soy miembro del FRELIMO y suministro alimento a sus guerrilleros. El FRELIMO liberará a Mozambique". Ese homi-

bre valiente murió: los portugueses le cortaron la cabeza.

378. Los portugueses practicaban a menudo otra forma de tortura consistente en arrancar las orejas y los ojos a los sospechosos de ayudar a los combatientes. Los soldados abandonaban después a sus víctimas en un lugar desierto diciéndoles: "Ahora vayan al FRELIMO para que les devuelvan los ojos y las orejas". Los soldados asesinaban a las mujeres embarazadas abriéndoles el vientre y arrancándoles el feto. Para obligar a los prisioneros a hablar, utilizaban un aparato especial que les aplastaba uno por uno los dedos de la mano. Cabía señalar que desde comienzos del mes de mayo habían llegado de Portugal 7.500 soldados en tres transportes de tropas para reforzar los efectivos existentes.

379. El peticionario aseguró al Comité que por muchas atrocidades que cometiera el ejército portugués y la PIDE, los combatientes de Mozambique nunca seguirían aquel ejemplo, y no por ingenuidad o idealismo; si el FRELIMO respetaba sus principios, si se negaba a confundir al Gobierno portugués colonialista o fascista con el pueblo portugués, a asesinar a la población civil o a torturar a los presos, la razón era que su causa era justa y su movimiento revolucionario. En Mozambique el pueblo era el defensor de los grandes principios de la humanidad, no el Gobierno colonialista y fascista de Portugal, aunque este Gobierno contara con el apoyo de la OTAN. El FRELIMO estaba seguro de vencer. Pensaba continuar la lucha, ampliar sus actividades y perfeccionar sus métodos para liberar definitivamente a su país y a su pueblo.

380. Respondiendo a unas preguntas, los señores Mondlane y dos Santos declararon que los servicios médicos portugueses en Mozambique eran, a lo sumo, insuficientes. En un país con una población total de más de 7 millones de habitantes, el primer programa de capacitación médica, para europeos y asiáticos únicamente, se había establecido tres años antes. Sin embargo, sólo se ofrecía una formación elemental y tardaría otros diez o quince años en alcanzarse el nivel de una escuela médica completa. Suponiendo que Mozambique fuera una provincia de Portugal, como afirmaba este último, el trato que recibía difería considerablemente no sólo del de las provincias metropolitanas en las que existían hospitales y centros de capacitación médica por todo el territorio sino también del de otras provincias de ultramar como Goa, donde a pesar de que la población no era más que de medio millón de habitantes, el Gobierno portugués había fundado una escuela de medicina hacía 20 años.

381. En todo Mozambique no había un solo médico africano. De los 200 médicos europeos, las dos terceras partes se concentraban en la capital, donde residía más de la mitad de la población europea. Aunque había dos o tres hospitales para la formación de enfermeras ayudantes, no existía un programa de capacitación de enfermeras africanas.

382. En las zonas en que se desarrollaba la lucha armada por la independencia, sólo existían clínicas de misiones y cuando éstas se cerraban por haberse cortado las comunicaciones, el FRELIMO tenía que establecer sus propias clínicas. A este respecto, el frente de liberación de Mozambique había establecido en Dar es Salaam un programa de capacitación de enfermeras al margen del sistema portugués. La primera promoción se graduó ese mes, y las enfermeras irían a atender a la población civil en las clínicas de Mozambique.

383. La política de asimilación del Gobierno portugués era una superchería: no había asimilación y jamás la hubo. Bastaba recordar el carácter de la colonización portuguesa y de la colonización en general para comprender que cualquier idea de asimilación era completamente ajena a la misma. En el ánimo del colonizador no cabía asimilar al pueblo colonizado, al que sólo se le pedía que se sometiera a la esclavitud y que rindiera producción. Hasta los últimos años, los textos políticos portugueses se habían referido a una política de asimilación. Según estos textos un habitante de Mozambique que aspirase a ser portugués debía saber leer y escribir, tener un empleo compatible con la ciudadanía portuguesa — es decir un empleo que le permitiese vestirse bien, comer a la portuguesa, etc. — y olvidar sus tradiciones africanas para impregnarse de una cultura importada de Portugal. Se le pedía, en resumen, que dejase de ser de Mozambique, sin ofrecérselo a cambio más que la seguridad de una completa despersonalización. Los textos actuales iban aún más lejos: se quería convertir a todos los habitantes de Mozambique en portugueses sin pasar por esa fase intermedia. Únicamente la lucha por la liberación podía poner término a esa situación intolerable.

384. Según las estadísticas recopiladas a fines del decenio anterior, de un total de 6.500.000 africanos únicamente 4.500 habían sido asimilados. Por consiguiente, era poco probable que la población africana actual, o sea 7 millones, fuera asimilada por 150.000 europeos. A su juicio, la asimilación, a la que se hacía referencia constante en Europa y en otras partes, no era más que un instrumento de propaganda. Un conocido periodista, en una serie de artículos aparecidos en *The New York Times*, se había referido incluso a la política portuguesa a este respecto como el único signo de esperanza entre los problemas del África meridional. Esta declaración no merecía que se la tomase en serio.

385. No había en realidad ninguna diferencia material entre el apartheid de Sudáfrica y la discriminación racial practicada por el Gobierno portugués, pues si una persona no era portuguesa no era un ciudadano, y mientras no se fuese ciudadano no se tenían derechos. En Mozambique no existía legislación racial, pero se regimentaba a los habitantes en la misma forma que en Sudáfrica. No había prácticamente servicios culturales para los africanos. Los portugueses favorecían los matrimonios mixtos para resolver el problema racial, pero había sólo 150.000 europeos en una población de 7 millones. Donde existían minorías blancas, éstas se veían obligadas a establecer sistemas de segregación. Por ejemplo, la totalidad de la ciudad capital estaba segregada en barrios europeos de lujo, barrios mediocres asiáticos y barrios miserables africanos. Todos los puestos profesionales correspondían a europeos, los asiáticos tenían las tiendas y hacían los trabajos de oficina. No había sinceridad de intenciones en la invitación extendida a las Naciones Unidas. Aunque los portugueses hubiesen invitado a la Organización a realizar una inspección local, toda misión enviada allí sería guiada y obtendría una falsa impresión.

386. Luego, en relación con un extracto citado de *The Economist* de 23 de abril de 1966 que comentaba la diferencia entre la administración portuguesa en África y la de Sudáfrica, los peticionarios declararon que, si bien *The Economist* presentaba generalmente un análisis más apegado a la realidad que muchos otros periódicos, la campaña de los portugueses para aprove-

char, con fines de propaganda, esos hechos, se había contagiado a muchas personas en el exterior, incluso a los responsables de periódicos tan imparciales como *The Economist*.

387. Un factor importante en la situación colonial era el sistema de dedicarse a la explotación de la producción de artículos comerciales. Hasta 1942 más de la mitad del país había estado en manos de compañías concesionarias que controlaban no solamente la tierra, sino al pueblo que vivía sobre ella, el cual tenía que trabajar por los salarios que fijaban las propias compañías. En 1942 el Gobierno portugués había decidido asumir un control directo. Desde ese momento su política fue dejar a los africanos la propiedad nominal de la tierra, pero estipular lo que debía plantarse en ella. Se estableció cierto número de compañías concesionarias para determinar los terrenos más apropiados para las diferentes cosechas y se obligó a la población local a cultivar esas cosechas y venderlas a las compañías a precios establecidos por el Gobierno. El resultado es un sistema de esclavitud moderna.

388. Respondiendo a unas preguntas acerca de las actividades del FRELIMO, los peticionarios indicaron que su organización estaba llevando a cabo amplios programas en la esfera social. Gran parte del apoyo recibido a este respecto había sido aportado como resultado de la información distribuida por el FRELIMO a los representantes en la Asamblea General y a los contactos establecidos a través de la Organización de la Unidad Africana con los países del grupo afroasiático.

389. El programa de educación general del FRELIMO se dividía en tres partes: en primer lugar, se educaba a la población a fin de prepararla para el servicio civil y los puestos administrativos cuando el país fuera independiente. A la mayoría de los estudiantes se les enviaba al extranjero para cursar estudios superiores.

390. En segundo lugar, el FRELIMO estaba tratando de proporcionar educación secundaria a toda la población: había establecido en Dar es Salaam una escuela a la que asistían más de 120 estudiantes de Mozambique. En Mozambique no había ni una escuela secundaria para africanos, cuya única posibilidad de estudiar consistía por lo tanto en ser admitidos en una escuela europea. De una población total de 7 millones de africanos, sólo 15 habían completado su educación secundaria. Los únicos establecimientos que realizaban un esfuerzo en este sentido eran los seminarios católicos para la formación de sacerdotes, y en ellos cursaban los primeros estudios la mayoría de los estudiantes enviados al extranjero. Además de la escuela de medicina mencionada ya, el FRELIMO pensaba establecer una escuela para maestros.

391. En tercer lugar, se habían iniciado programas en las zonas boscosas de Mozambique para hacer frente al problema de analfabetismo, y se habían creado también escuelas primarias. Sin embargo, esos establecimientos no tenían carácter permanente, pues habían de desplazarse según la posición del ejército portugués.

392. En el nivel básico, o sea el nivel del alfabetismo, el progreso era todavía escaso por la falta de personal y de locales adecuados. No obstante, se habían formulado llamamientos al exterior. Se disponía de enseñanza secundaria y técnica y los Estados Miembros de las Naciones Unidas proporcionaban becas en todas partes del mundo. El tercer nivel de educación sólo se

podía obtener en el exterior. Todos los años se iban al exterior unos 40 alumnos de Mozambique, en su mayor parte para recibir educación técnica. La Universidad Fraternal Patrice Lumumba de Moscú había establecido arreglos especiales para permitir que los estudiantes terminaran su educación secundaria antes de seguir los cursos universitarios. Tres universidades de los Estados Unidos habían establecido arreglos semejantes, pero esos alumnos no podían ingresar en las universidades de Europa occidental. El país necesitaba más becas en el exterior y podía contratar a todos los graduados a su retorno. También podía enviar estudiantes a seguir cursos breves de formación, de uno a seis meses de duración, en cualquier país que estuviese dispuesto a prestar ayuda a Mozambique.

393. El FRELIMO necesitaba mucha ayuda para llevar a cabo sus programas de alfabetización, pero, a pesar de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, no parecía que iba a recibir asistencia de los organismos especializados, que habían ofrecido diversas excusas, pero puesto que las Naciones Unidas ya se habían pronunciado sobre esta cuestión, no debieran encontrar dificultades para facilitar esta asistencia. Asimismo, convendría que el Comité Especial alentase a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a ofrecer al FRELIMO facilidades para la capacitación de sus miembros en las técnicas de la enseñanza.

394. Cuando se les preguntó si los estudiantes de Mozambique que viajaban al exterior para estudiar volían para actuar como dirigentes en las esferas para las cuales habían sido preparados, los peticionarios declararon que no se había tropezado con ningún problema en la absorción de los estudiantes de Mozambique que regresaban al país después de su graduación. El país tenía enorme necesidad de personal docente; ya había recibido maestros de varios países europeos, y había perdido más aún. También había gran necesidad de personal médico: todavía no se contaba con doctores africanos en el país, pero el primer estudiante de medicina estaba a punto de terminar sus estudios. También se necesitaban grandemente economistas. Por lo tanto, no había razón para que ningún estudiante de Mozambique dejase de encontrar su lugar en el país a la terminación de sus estudios; y los gobiernos de los países donde los estudiantes se preparaban estaban dispuestos a ayudarlos a retornar. Se sabía del caso de un estudiante en los Estados Unidos que había tenido problemas psicológicos y en cuyo nombre se había hecho un llamamiento a fin de que se le permitiera permanecer en ese país para recibir el tratamiento mental que no podía recibir en Tanzania, pero ese era un caso especial.

395. Respondiendo a una pregunta acerca de la actitud de las iglesias en Mozambique, señalaron que Portugal se consideraba a sí mismo como un baluarte del cristianismo. Un nuevo acuerdo entre la Iglesia y el Estado había fortalecido aún más a la Iglesia, que administraba toda la educación de los niños africanos. Hasta se les obligaba a concurrir a la escuela en épocas del año diferentes de las de los niños europeos y asiáticos, a quienes no se aplicaban estas estrictas reglamentaciones. El Gobierno portugués suministraba una pequeña suma de dinero para la educación de los niños africanos, y como la Iglesia deseaba el derecho exclusivo de la administración de la educación, no tenía otro recurso que apoyar al Gobierno. Sin embargo, había que reconocer que se le debía el que se aplicase una política más liberal en el Vaticano y que los misioneros

demonstraran menos entusiasmo por la conservación del colonialismo.

396. En cuanto a la ayuda concreta que podían proporcionar el Comité Especial y las Naciones Unidas, los peticionarios opinaban que en las resoluciones aprobadas por el Comité Especial y la Asamblea General respectivamente se recogían muchos de los deseos de la población africana de Mozambique. Sin embargo, no había ninguna indicación clara de que se hubiese tomado medida alguna para aplicar esas resoluciones, y los países que habían votado en contra de ellas seguían apoyando a Portugal, a Sudáfrica y a Rhodesia. Además, aparte del programa de becas de las Naciones Unidas, los demás organismos especializados no habían hecho ninguna aportación positiva, con la única excepción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esperaban que los organismos especializados indicasen las medidas que estaban dispuestos a tomar.

397. La situación de los refugiados en Malawi era desesperada. Durante más de un año, desde la llegada al país del primer grupo de refugiados, el problema había ido en aumento. FRELIMO había hecho todo lo posible para aliviar la suerte de los refugiados conocidos por el Gobierno de Malawi y, aunque el Gobierno hacía todo lo que estaba en sus manos hacer, había establecido planes claramente definidos para aliviar la situación. La mayoría de los refugiados se había dirigido a las islas en el lago de Malawi, cuyas aguas oficialmente se consideraban propiedad de Mozambique, aunque las islas en sí constituían territorio de Malawi. En aquel momento había más de 8.000 refugiados, la mayoría de los cuales aún permanecía en las dos islas, con unos pocos otros en la zona limítrofe de Malawi meridional.

398. Respecto a la posibilidad de una mayor ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el propio Comité Especial debía preguntar al Alto Comisionado qué propuestas le había hecho el Gobierno de Malawi y qué relación, de haberla, se había establecido, así como qué problemas habían impedido que se prestara a los refugiados en Malawi la misma asistencia que, por ejemplo, se había prestado a los de Tanzania. A los organismos religiosos y otros organismos humanitarios no se les concedían las mismas facilidades para ayudar a los refugiados en Malawi que las concedidas en otros países. Los peticionarios pedían al Comité Especial que se ocupara en lograr que se ofrecieran esas facilidades.

399. Respondiendo a la pregunta de cómo las Naciones Unidas podrían ayudarles a propagar la verdad sobre el comportamiento de los portugueses y de los países que sostenían a Salazar, los peticionarios declararon que aunque la Organización había emitido una serie de publicaciones excelentes sobre las colonias portuguesas, dichas publicaciones no estaban a disposición del público. Los documentos de trabajo preparados por la Secretaría para el Comité Especial eran exhaustivos y objetivamente correctos, pero en los informes anuales preparados para el público sólo se hacían algunas referencias a esos Territorios. Por consiguiente, los peticionarios sugerían que las Naciones Unidas prepararan un documento para su distribución al público en general o a la Asamblea General, en el que se incluyeran todos los hechos pertinentes y se indicara por qué razón tantos Miembros de las Naciones Unidas habían condenado la política de Portugal.

400. A pesar de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la República Federal de Alemania y Bélgica suministraban armas a Portugal a través de la OTAN o por otros conductos. El FRELIMO había podido establecer con toda seguridad y tenía una lista de las armas capturadas a los portugueses, con número de serie para probarlo — que el ejército portugués tenía armas, rusiles, fusiles-ametralladoras, y metralletas —, procedentes de Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Además, las tropas portuguesas habían recibido recientemente aviones italianos construidos en la República Federal de Alemania.

401. Antes que pudiera aplicarse la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, dichas Potencias tendrían que retirar su apoyo a Portugal. Asimismo tendrían que poner fin a la formación de sus oficiales bajo los auspicios de la OTAN, que según alegaban, era parte del proceso normal de su programa para la defensa de Europa. Sin embargo, cabía suponer que todos los oficiales superiores portugueses de Estado mayor habían recibido formación especial en la OTAN, en vista, sobre todo, de la preocupación conocida de algunas Potencias occidentales ante la extensión de la guerra de guerrillas en todo el mundo.

402. La posición oficial de las Potencias de la OTAN era que no desarrollaban actividades al sur del Trópico de Cáncer, pero existían pruebas de ayuda indirecta; de conformidad con el testimonio de un prisionero portugués, en Mozambique había tropas paracaidistas portuguesas equipadas por la OTAN. Se desconocía la razón de su presencia, aunque desde luego el Gobierno portugués no admitiría nunca públicamente que se encontraban en Mozambique para combatir. El prisionero portugués había dicho que continuaba la construcción de bases aéreas y se habían comprado en la República Federal de Alemania aviones de combate a reacción. Sólo cabía llegar a la conclusión de que la ayuda sola de la OTAN permitía a Portugal costear sus gastos militares.

403. Las tácticas de las Potencias occidentales eran sinuosas. Si realmente se opusiesen al colonialismo y sintieran simpatía por la lucha popular de liberación, por lo menos, en vista de la resolución 2107 (XX), habrían retirado toda ayuda que pudiese consolidar la posición de Portugal.

404. Otra violación de las disposiciones de la resolución 2107 (XX) la constituía la ayuda financiera que prestaban a Portugal los bancos de Europa central y de los Estados Unidos, ayuda sin la cual Portugal no hubiese podido seguir la guerra en Africa pues más de la mitad de su presupuesto nacional se le había ido en ella. Las Potencias occidentales deberían, pues, negar su ayuda a Portugal.

405. En respuesta a un pedido de información sobre las atrocidades cometidas por los portugueses en Mozambique, deberían ser señaladas a la atención, en especial, de los países representados en el Comité Especial que todavía daban asistencia indirecta a Portugal, los peticionarios indicaron que el Gobierno portugués se había visto obligado a recurrir a la tortura para mantener el colonialismo en Mozambique. El FRELIMO tenía la intención de presentar al Comité Especial un informe detallado sobre las torturas a que los portugueses sometían a la población de Mozambique.

406. En cuanto a la actitud de Portugal hacia el régimen rebelde de Rhodesia, no era inesperada, habida cuenta de las medidas tomadas anteriormente para establecer una embajada en Lisboa y mantener el tráfico de comunicaciones entre Beira, Lourenço Marques y Salisbury.

407. A juicio de los peticionarios la situación en Rhodesia sólo cambiaría por la fuerza desde el interior, y el FRELIMO haría todo lo posible para provocar este cambio tan pronto como lo permitieran sus recursos materiales. Los europeos de Rhodesia sabían bien que el FRELIMO tenía intención de destruir el oleoducto cuanto antes y por ello lo mantenían bajo vigilancia constante tanto en tierra como desde el aire. El FRELIMO apoyaría a los africanos de Rhodesia por todos los medios posibles ya que no podía conseguirse verdadera libertad para Mozambique mientras Rhodesia y Sudáfrica siguieran en manos de Potencias extranjeras.

408. Existía también una coordinación entre Sudáfrica, Rhodesia del Sur y Portugal en cuanto a sus políticas para el control de los africanos. También existía una coordinación militar. Cada seis meses iban a Salisbury oficiales portugueses para mantener conversaciones, y un oficial de alto rango visitaba regularmente a Mozambique. Además, Sudáfrica se había comprometido a apoyar a Mozambique.

409. Los tres países se ayudaban unos a otros económicamente. Por ejemplo, Mozambique proporcionaba a Rhodesia del Sur y Sudáfrica unos 300.000 trabajadores anualmente por contrato.

410. Las relaciones económicas entre Portugal y Mozambique constituían un obstáculo a la liberación del pueblo de Mozambique. La lucha desarrollada por el FRELIMO tenía por objeto, en particular, romper las antiguas estructuras económicas impuestas por el colonialismo y reemplazarlas con otras que permitieran al pueblo de Mozambique desarrollarse libremente.

411. La corriente de capitales del mundo occidental hacia Portugal y sus colonias proseguía. Además del Banco Colonial de Portugal operaban en el país otros dos bancos, bien conocidos: el Standard Bank of South Africa y el Barclays Bank, ambos vinculados muy estrechamente con Sudáfrica y con Rhodesia del Sur.

412. Aunque el Gobierno de Portugal había establecido una organización de importación y exportación en Mozambique, estas actividades habían estado durante muchos años en manos de compañías extranjeras, ya que la participación portuguesa se había desarrollado a partir de la segunda guerra mundial.

413. Los negocios de importación y exportación de Mozambique estaban directamente ligados a la región interior de Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Existía un acuerdo entre Portugal y Sudáfrica en virtud del cual casi el 50% de los bienes exportados desde la zona Witwatersrand tenían que pasar por Mozambique, en compensación de lo cual, se enviaba cada año a 150.000 obreros de Mozambique, para trabajar como mano de obra barata en las industrias mineras y de otro carácter en Sudáfrica. El Gobierno portugués de Mozambique recibía asimismo, en virtud de ese acuerdo, asistencia financiera de Sudáfrica para el funcionamiento de sus ferrocarriles. La situación era similar en cuanto a Rhodesia del Sur.

414. En las circunstancias del momento, el abrir los Territorios a las compañías extranjeras sería sola-

mente perjudicial y alejaría la independencia. En los últimos tres años algunas compañías europeas occidentales también habían obtenido enormes concesiones, particularmente en Angola. Debería darse libertad al pueblo del país de modo que utilizara sus energías para satisfacer sus propias necesidades básicas. Si había de invitarse a las compañías extranjeras, debería hacerlo un gobierno elegido libremente por la mayoría. No estaban de acuerdo con la opinión de los colonos blancos portugueses contrarios a Salazar, que sólo querían librar de Portugal para obtener ellos mismos el control.

415. Recordando el párrafo 5 de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General que "condena la política del Gobierno de Portugal que viola los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento, en gran escala, de inmigrantes extranjeros en los territorios y la exportación de mano de obra a Sudáfrica", los peticionarios declararon que la cuestión de la colonización blanca afectaba a Angola, más cerca de Portugal y más rica, en mayor grado que a Mozambique, a pesar de que este último tenía miles de colonos europeos.

416. La cuestión de la explotación de la tierra en beneficio de las compañías europeas se exacerba con el hecho de que cuando los africanos bonificaban ciertas zonas del país, que eran pantanos boscosos, el Gobierno se apoderaba de ellas para la llamada colonización civilizada, que consistía en su mayor parte de europeos. Había una de estas zonas donde, sobre un total de más de quince mil familias, no más de quince a veinte eran africanos. La política del Gobierno portugués era la de traer más europeos, para poder alegar que la zona era preponderantemente blanca. En junio de 1960, cuando los campesinos del norte de Mozambique discutieron el derecho de las autoridades portuguesas a emplear la fuerza para hacerse devolver las tierras fértiles de la planicie Macondes, la administración portuguesa emprendió matanzas a mansalva. En efecto, Portugal tenía la política de instalar una población blanca en esos territorios y especialmente en el valle del Limpopo. Se apoderaba de las tierras de los africanos y expulsaba a la población para reemplazarla con colonos blancos.

417. En respuesta a una pregunta, dicen los peticionarios que según cálculos recientes el número de soldados portugueses en Mozambique se aproximaba a 50.000. Sin embargo esa cifra no incluía otros 7.500 hombres que, según las agencias informativas portuguesas, habían llegado el mes último y otros 6.000 que, se sabía, arribaron a Mozambique en los últimos días. A ese ritmo, el número de soldados portugueses podría ser de 75.000 hombres a fines de 1966.

418. Los portugueses habían hecho declaraciones de propaganda por todo el mundo en las que afirmaban haber cerrado todas las fronteras para evitar infiltraciones. Sin embargo, al parecer se contradecían al manifestar, según el artículo de *The New York Times* mencionado anteriormente, que todos los terroristas detenidos al tratar de cruzar la frontera entre Tanzania y Mozambique eran enviados de nuevo a Tanzania por la policía. Esto difícilmente sería posible si la primera afirmación fuese cierta. Sin embargo, las fuerzas portuguesas hacían todo lo posible por guardar todas las fronteras entre Mozambique y los países vecinos.

419. El Gobierno portugués había estado reclutando a africanos, muchos de los cuales luego desertaban. El 95% de ellos eran simplemente jóvenes que ignoraban que se los enviaba a una guerra. Cuando se pro-

ducía un choque armado se les amenazaba con la ejecución si no disparaban contra su propio pueblo. Parecía difícil, pues, evaluar la moral de los portugueses, pero como su ejército estaba reaprovisionado y equipado en forma adecuada, probablemente era bastante buena. Sin embargo, no se podría predecir por cuánto tiempo podía Portugal continuar a pesar del apoyo de sus aliados. Desde 1961, Portugal asignaba en su presupuesto nacional sumas cada día mayores a los gastos militares. Al mismo tiempo, recibía grandes sumas de las compañías que funcionaban en las colonias.

420. Cuando se les pidió que comentaran la afirmación de las Potencias coloniales en el sentido de que la imposición de sanciones perjudicaría más que a nadie a los africanos, los peticionarios respondieron que había una falta aparente de sinceridad de parte de las Potencias coloniales; la sugerencia de que los africanos sufrirían con la imposición de sanciones no debía tomarse en serio. Por lo que respectaba a Mozambique, la población europea sería la más afectada por estas medidas, ya que eran los consumidores de los artículos de que se trataba. La población africana producía sus propios artículos en cantidad suficiente y, en definitiva, pensaba incluso exportar sus productos a los países vecinos.

421. Las afirmaciones de Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur en el sentido de que todos los movimientos de liberación africanos estaban inspirados por los comunistas no habían afectado la popularidad del FRELIMO en el extranjero. A esas declaraciones sólo se prestaba oídos en Europa y en América. Los esfuerzos portugueses para tildar al FRELIMO de comunista no harían más que aumentar su popularidad en algunos países africanos. Además, tales esfuerzos ofrecían a los comunistas una propaganda excelente, ya que el FRELIMO, que luchaba por la libertad del pueblo, se identificaba en Africa con la ideología y objetivos del comunismo mundial. Por consiguiente, para el habitante medio de Mozambique, los pueblos de los países comunistas eran verdaderos combatientes por la causa de la libertad de Mozambique. El hecho de que el FRELIMO fuese o no comunista carecía de importancia para la población africana, que no ponía en tela de juicio su ideología o principios, sino únicamente la de aquellos que apoyaban a Portugal.

422. Al preguntárseles si la información sobre las actividades del FRELIMO llegaba a las zonas ocupadas de Mozambique, formando así un núcleo de resistencia pasiva entre toda la población, los peticionarios respondieron que el FRELIMO suministraba toda la información posible a la población para animarla a organizar la resistencia pasiva. Así, el boletín "La voz de la revolución", se difundía por todo el país al igual que un sin número de folletos. Se recurría también a los servicios de radio de los Estados africanos independientes para difundir todas las noticias posibles. Además, en Africa seguía funcionando el "telégrafo de la selva", y los mensajes se transmitían rápidamente de viva voz a todos los puntos de Mozambique. El FRELIMO hacía todo lo posible para presentar a la población los hechos verdaderos, sobre todo teniendo en cuenta que deseaba desmentir la afirmación portuguesa de que sus miembros eran simples terroristas ávidos de matanzas.

423. Las actividades del FRELIMO estaban a cargo de personal civil y militar. Todos los programas ajenos a lo militar, fueren educativos, económicos o admi-

nistrativos, recaían en los civiles. La principal función del sector militar, que estaba empeñado, sin apasionamiento, en una lucha racional, consistía en proteger al pueblo del ejército portugués.

424. Respondiendo a una pregunta relativa a la posibilidad de que, con arreglo al sistema vigente, creciera mucho el número de votantes elegibles, declararon que las nuevas medidas jurídicas tenían por objeto favorecer a los colonos blancos, cuya edad solía ser mayor que la de los africanos. Esos colonos tenían, pues, una proporción mucho más grande de votantes elegibles, por esa razón solamente. No obstante, a ello no se debía totalmente la cifra de 2.000 votantes africanos de un total de 64.000. Aunque aumentase rápidamente el número de votantes africanos bajo el sistema en vigor, el FRELIMO rechazaba la idea de unidad con Portugal. El pueblo de Mozambique quería un parlamento en su propio país, no en Lisboa. Hacía falta cambiar radicalmente la orientación de la legislación.

425. El Sr. Mbule, hablando en nombre de UDE-NAMO, manifestó que, cuando los colonos portugueses llegaron a Mozambique cinco siglos atrás, introdujeron la política de "dividir para reinar" provocando desacuerdos entre las diversas tribus.

426. Bien sabido era que Portugal era un pequeño país, pobre, atrasado y militarmente débil, al que el Reino Unido protegía contra las ambiciones españolas desde 1173. Esta alianza había servido también de pretexto para proteger a las colonias portuguesas en Africa, a pesar de que Portugal nunca hizo nada por la población africana de esos territorios, salvo explotarla. Pese a la condena de la opinión mundial, la situación se prolongaba. No contento con enemistar a las tribus unas contra otras, el Gobierno portugués llegó a introducir en 1928 la infame política de "asimilación" de Salazar, o sea la división del pueblo en clases. Esta política había hecho añicos la dignidad y la integridad del pueblo en favor de un pequeño grupo seleccionado de africanos que tenían conocimientos rudimentarios de portugués. Estos últimos se aislaban de la masa y trataban de vivir como los portugueses, procurando adoptar sus costumbres y modo de ser, y hasta tenían vergüenza de hablar su idioma nativo. Habían adquirido así la condición de "asimilados" portugueses, lo que les daba derecho a salarios discriminatorios y privilegios especiales destinados a hacerlos sentir como verdaderos ciudadanos portugueses "negros". Portugal había puesto su última esperanza de quedarse en Africa en esos asimilados. Su presencia hacía fracasar toda tentativa de liberar el país y, en lo que se refería a la lucha por la libertad y la independencia, eran aún más peligrosos que los propios portugueses.

427. Portugal tenía la intención de establecer otro régimen racista similar a los de Sudáfrica y Rhodesia del Sur utilizando ese sistema, y con ese propósito había modificado en 1961 la Constitución cambiando la palabra "colonia" por la expresión "Portugal de ultramar". Sin embargo, no introdujo los cambios deseados en la vida de los habitantes sino que, por el contrario, Portugal conservó su actitud arrogante y continuó privando a la población de sus derechos humanos y sus legítimas aspiraciones a la libertad y la independencia.

428. En 1961, para apaciguar a la opinión mundial y engañar a las Naciones Unidas, Portugal proclamó algunas reformas, que no sólo no habían respondido a las aspiraciones de la población sino que habían puesto

a los colonos blancos en mejor posición aún para asumir la responsabilidad política si Portugal se veía obligado a acceder a las reivindicaciones del pueblo, que pedía se reconociera su derecho a la libre determinación.

429. Al anunciar esas reformas en 1961, el ex Ministro para las Provincias de Ultramar, Sr. Moreira, había declarado que su Gobierno creía necesario aumentar la colonización de las provincias africanas con los colonos portugueses que desearan establecerse en ellas y que se estaban adoptando, con alta prioridad, medidas realistas y enérgicas al respecto. La llegada de muchos colonos y la centralización de la administración local formaban parte de un plan tendiente a convertir a la colonia en un país como Sudáfrica y Rhodesia del Sur. La política de "integración multirracial" de Portugal era un medio de engañar a la opinión mundial; Portugal no deseaba de ningún modo estrechar sus vínculos con el pueblo africano, y sólo le interesaba establecerse allí por la fuerza y negar a los africanos su derecho a las tierras de que los había despojado con perfidia y engaños.

430. Portugal había abolido en 1954 el Estatuto Nativo con el propósito de ahogar las reivindicaciones de independencia del pueblo; tenía además la intención de interpretar a su modo el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y se negaba a cooperar con las Naciones Unidas. Era sorprendente, por consiguiente, que Portugal siguiera siendo Miembro de las Naciones Unidas.

431. Desde 1961 la población africana estaba siendo sistemáticamente exterminada para permitir que los colonos portugueses tomaran posesión de sus tierras y se establecieran en su país. Con este fin se había creado con la complicidad del Gobierno una organización racista terrorista similar a la OAS de Argelia. De nada servía entonces abolir el estatuto nativo y declarar que Mozambique era una provincia de ultramar cuyos habitantes se consideraban automáticamente ciudadanos portugueses, si la población era perseguida y exterminada.

432. Uno de los métodos utilizados para dispersar a los habitantes en las zonas densamente pobladas era sembrar el terror y el miedo. En agosto de 1964, 20.000 personas habían huido de Mueda a Tanzania; también en marzo y agosto de 1965 se había producido un éxodo de refugiados de Nyassa a Malawi; muchos miles habían sido detenidos, entre ellos, el Sr. Domingos Arono José Graveirinha, periodista muy conocido. Los portugueses habían enviado 3.000 soldados para aplastar una manifestación nacionalista en Tete; en esa ocasión varios cientos de inocentes habían sido masacrados, muchos otros arrestados y unas 12.000 personas habían huido a Zambia. Esos no eran más que algunos ejemplos de las atrocidades cometidas diariamente. El número de refugiados aumentaba continuamente y seguiría aumentando mientras se permitiera a Portugal sabotear y reprimir la lucha por la liberación en Mozambique. Portugal predicaba la igualdad pero practicaba la discriminación.

433. En 1961, después del levantamiento en Angola y temiendo sus repercusiones en otros Territorios, especialmente en Mozambique, Portugal había adoptado medidas preventivas y constituido en abril la Policía Internacional da Defesa do Estado (PIDE). Esa organización estaba compuesta de asesinos, bandidos y ex criminales a los que Salazar había concedido el perdón a condición de que cooperaran con su política cri-

minal. La PIDE estableció su sede en Lourenço Marques y en Beira. Muchas personas, incluso el Dr. Agostinho Illunga, Dinis Mondlane y Tomas Nyatumba habían sido acusados de alta traición contra el Gobierno. En 1962 esas personas fueron condenadas a cinco años de prisión en Lisboa, seguidos de 15 años de residencia en Portugal, y fueron privadas de todos sus derechos políticos.

434. Los portugueses "negros" y su red de informadores planeaban arrestos en masas y éstos eran ejecutados por el hombre blanco. PIDE era una organización terrorista copiada de la Gestapo. Algunos de sus miembros habían llegado a infiltrarse en los movimientos de liberación para traicionarlos. Trataban de expulsar del partido y hasta de los países que los acogían a los combatientes por la libertad; tenían prisiones en las que encerraban indefinidamente a los nacionalistas. Utilizando como cebo el dinero que obtenían de Portugal, engañaban a los jefes nacionalistas para hacerlos regresar a sus países nativos, donde les esperaba el arresto inmediato, como en el caso de Daniel Mahlayeye, Matias Mboa, Bomba Tembe, José Cavane y de muchos otros. Se llamaban a sí mismos el "Frente de Liberación de Mozambique" y tres años atrás habían proclamado una lucha armada inexistente para confundir a la opinión mundial. Recientemente se habían jactado de tener a su favor dos terceras partes de Mozambique, y sin embargo se resistían a unirse al pueblo. Esa situación era un obstáculo considerable a la lucha por la liberación, pero no disminuía la determinación del pueblo oprimido de Mozambique de luchar contra el colonialismo, el racismo y el neocolonialismo hasta el último hombre.

435. Rhodesia del Sur era un ejemplo concreto de maniobras imperialistas; Ian Smith no se hubiera atrevido jamás a proclamar unilateralmente la independencia si no hubiera estado seguro de contar con el apoyo de la "alianza impía" que unía a Verwoerd, Smith y Salazar.

436. Desde 1961, cuando Portugal había anunciado su intención de fomentar la inmigración de colonos blancos, había aumentado considerablemente la población blanca, en particular en el norte. Grandes cantidades de tropas habían sido instaladas allí desde la sublevación de Angola, como parte de un plan tendiente a cerrar herméticamente la frontera a las fuerzas nacionalistas entrenadas en el extranjero.

437. Aunque Portugal era un país pobre, se jactaba de poder resistir contra doce millones de habitantes. Esto se debía al apoyo material de la OTAN, que fomentaba la creación de un imperio racista en África Meridional.

438. Las fuerzas portuguesas estacionadas en Mozambique consistían en divisiones del ejército regular asistidas por artillería, cuerpos de ingenieros, un cuerpo médico, infantería, caballería, un cuerpo de unidades de abastecimiento, un ejército especial de cazadores, un cuerpo de voluntarios, una fuerza aérea, una fuerza de policía y un cuerpo de reserva. Todas esas fuerzas estaban eficazmente equipadas con armas modernas y municiones en cantidades ilimitadas. El año último había 45.000 hombres, pero desde diciembre esa cifra había ascendido a 60.000.

439. Como consecuencia de la política colonial de Portugal, Mozambique se había convertido en un estado policiaco, una tierra de cárceles y de campos de con-

centración y un campo de batalla donde el pueblo africano vivía en el terror.

440. En cuanto a los grupos auténticos de oposición, la UDENAMO había sido el primer partido de esa clase formado fuera de Mozambique.

441. En 1962 se creó un frente de liberación. Sin embargo, en 1963 se expulsó del frente a varios miembros, que se fueron a El Cairo y fundaron la UDENAMO. En 1963 y 1964 realizaron reuniones en El Cairo con los dirigentes del FRELIMO, consultaron al Comité de Liberación de la Organización de la Unidad Africana y pidieron una nueva reunión con el FRELIMO. Lo mismo que los miembros del FRELIMO, los de la UDENAMO luchaban por la libertad; pero sin unidad sería imposible organizar una lucha armada para liberar a Mozambique.

442. En nombre de la UDENAMO pidió al Comité Especial que sometiera el problema al Consejo de Seguridad, puesto que todos los medios posibles de presión y persuasión morales habían sido agotados y que Portugal hacia caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la administración portuguesa en Mozambique. El Consejo de Seguridad debería adoptar medidas enérgicas para impedir que Portugal aterrorizara y exterminara a la población africana de Mozambique, y para obligarlo a aplicar todas las resoluciones precedentes de las Naciones Unidas a fin de restablecer la paz y hacer respetar la vida y los bienes del pueblo africano.

443. Para terminar, reiteró la protesta de la UDENAMO contra la violación por Portugal de la Declaración de los Derechos Humanos, y pidió al Comité Especial que presentara el caso al Consejo de Seguridad.

Audiencia de peticionarios en relación con Guinea bajo administración portuguesa

444. El Sr. Amílcar Cabral, hablando en nombre del Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), dijo que durante el año pasado la situación en Guinea había evolucionado considerablemente, pero que, por desgracia, seguía sin resolverse el problema fundamental. La lucha armada continuaba en Guinea y las Islas de Cabo Verde. El pueblo de Guinea detestaba la guerra, pero ésta le había sido impuesta por Portugal, que se negaba a reconocer sus derechos más elementales. Al combatir, el pueblo de Guinea defendía también la causa de las Naciones Unidas, es decir, la causa de la humanidad. Tres años de lucha armada habían convencido a los militantes de que no combatían solamente contra la opresión portuguesa, sino también contra todos los regímenes que hacían que todavía existiera la opresión del hombre por el hombre.

445. El Sr. Cabral afirmó que se presentaba ante el Comité Especial como luchador por la libertad y no en calidad de político. Sin embargo, la lucha que sostenía su país era una lucha política; no se trataba de matar a todos los soldados portugueses ni de ganar una guerra sino, sencillamente, de liberarse, y éste era un objetivo político.

446. Con el propósito de ayudar al Comité en su labor, se había hecho acompañar de varios testigos imparciales, que no tenían ningún vínculo especial con la Guinea llamada portuguesa y que estaban dispuestos

a hacer declaraciones. Además, como lo hiciera el año pasado, había traído consigo algunas películas documentales que, mejor que cualquier testimonio oral, informarían a los miembros del Comité Especial sobre lo que realmente ocurría en el país.

447. Señaló que el Presidente de su Partido acababa de ser nuevamente condenado en secreto. Hacia poco se había sometido a torturas a otros militantes. En cuanto a las detenciones arbitrarias, continuaban multiplicándose.

448. Recordó que en la mañana del 5 de junio, 10 aviones de bombardeo seguidos de cuatro de propulsión a chorro habían bombardeado una pequeña aldea de Guinea, donde en la víspera se había celebrado una reunión de militantes. La aldea había quedado completamente arrasada, contándose siete muertos y 15 heridos graves. Dichos aviones eran B-26 y Fiats fabricados respectivamente en los Estados Unidos y en la República Federal de Alemania. Portugal, que era un país subdesarrollado y que figuraba en último término en todas las estadísticas relativas a Europa, no fabricaba aviones. Así, pues, ¿por qué los países occidentales lo ayudaban a bombardear al pueblo de Guinea? El peticionario no comprendía las contradicciones que se advertían en la actitud de los Estados Unidos que, aun cuando se proclamaban amigos de África, seguían ayudando a Salazar y a los criminales portugueses. Las legítimas aspiraciones del pueblo de Guinea no eran de ninguna manera incompatibles con las de los Estados Unidos y la República Federal de Alemania.

449. El peticionario expresó la esperanza de que ya que no podía proporcionar armas al pueblo de Guinea, el Comité Especial hiciera uso de su influencia para que este pueblo recibiera ayuda internacional en materia sanitaria, económica y educativa. Las regiones del país ya liberadas eran las que, en efecto, tienen la mayor necesidad de una ayuda de esta índole.

450. El PAIGC ya había liberado casi la mitad del Territorio de Guinea. Las fuerzas enemigas se habían visto obligadas a acantonarse en sus cuarteles. Todos los testigos oculares que lo acompañaban no habían visto, de los portugueses, más que sus aviones. En el conjunto de las regiones liberadas, los habitantes no corrían riesgo alguno de ser detenidos o asesinados por las tropas portuguesas. Solamente los bombardeos aéreos causaban víctimas.

451. En el resto del territorio de Guinea, vastas zonas escapaban al control de los portugueses. Algunos las consideraban liberadas. El PAIGC era menos categórico, porque aún no las dominaba. La verdadera situación era la siguiente: en el Sur, las regiones liberadas eran las de Catió, Fulacunda, aproximadamente la mitad de la de Xitoli, y la de Boé. En el Norte, el PAIGC controlaba las regiones de Oio y de Farim, aproximadamente la mitad de la de São Domingos, alrededor del 30% de la de Canehungo y un 25% de la de Gabu. En Bissau, los portugueses no ejercían ya ningún control político ni militar. De hecho, sólo dominaban sus propias ciudades.

452. En contestación a varias preguntas, dijo que el PAIGC todavía no controlaba una sola pulgada del territorio de las Islas de Cabo Verde. Por el momento se limitaba a reforzar su organización local para librar incesantemente la lucha armada, puesto que la actitud de Portugal no le dejaba otra alternativa: en efecto, el hambre y los malos tratos infligidos por la Potencia ocupante se habían hecho intolerables.

453. Los problemas administrativos de los territorios de los que era vocero eran problemas realmente fundamentales. Los portugueses habían estado en la Guinea llamada Portuguesa durante cinco siglos, y en todo ese tiempo habían actuado siempre de manera que la población local no pudiese administrarse a sí misma. El 99,7% de esa población era analfabeta. Por consiguiente, el problema de la formación de dirigentes era fundamental. Se procuraba resolverlo recurriendo a los pocos elementos nacionales disponibles y a los expertos proporcionados por los pueblos africanos. Las regiones liberadas estaban divididas en zonas que administraba el PAIGC. El partido se esforzaba por resolver en las regiones y las zonas los problemas administrativos, sanitarios, educativos, económicos, etc.

454. En materia de salud pública el problema principal que se planteaba era la necesidad de médicos y medicamentos. En el último período de sesiones del Comité Especial los peticionarios habían pedido que las Naciones Unidas intercediesen ante la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones competentes a fin de que prestaran asistencia médica. También habían pedido que la Organización Mundial de la Salud (OMS), directamente o por conducto de países africanos vecinos, buscara la manera de proporcionar médicos a su movimiento de liberación. Pero hasta la fecha la situación seguía siendo trágica, tanto en lo que respecta a los médicos como a los medicamentos. Su partido trataba de resolverlo. Había creado en sus bases centros sanitarios en los que se atendía a los heridos leves y a la población. Había instalado un hospital militar en el Sur y otro en el Norte. Algunos enfermeros formados por los portugueses en Bissau daban a su vez capacitación sanitaria a jóvenes voluntarios de ambos sexos.

455. En materia de enseñanza, el partido había creado casi 100 escuelas en las regiones liberadas; ya había cuatro veces más escuelas primarias que en tiempos de los portugueses: asistían a las escuelas más de 8.000 niños contra 2.000 en la época en que la Potencia ocupante proporcionaba la enseñanza. El partido se preocupaba por formar personal docente en el interior y en el exterior del país. Para ello necesitaba ayuda extranjera. Para el mes de julio próximo había organizado un curso de perfeccionamiento de maestros que se daría en el país. Se había movilizado a todas las universidades del país para lograr el desarrollo de la enseñanza literaria y científica. Con respecto a los maestros se planteaba un agudo problema, pues por razones lingüísticas no era posible recurrir a profesores extranjeros. La falta de manuales y de material didáctico era también un problema muy grave. El Partido había editado por sus propios medios manuales de lectura y había adquirido algunas obras científicas y algunos manuales de matemáticas, pero la necesidad de libros y material didáctico seguía siendo considerable. Si la UNESCO — por la cual el peticionario sentía la más viva admiración — pudiese ayudar a su movimiento en este campo, contribuiría muy eficazmente a la lucha contra el analfabetismo.

456. En cuanto a la economía del país, ni siquiera podía decirse que fuera subdesarrollada: no se había desarrollado en absoluto. Portugal había hecho de la Guinea Portuguesa una colonia en primer lugar de esclavos y luego de factorías. Hasta la fecha la norma había sido el monocultivo. Se empezaba a fomentar otros cultivos, sobre todo el del maní. El peticionario

era el único ingeniero agrónomo del país, pero esperaba la llegada de tres colegas del extranjero.

457. La economía de la Guinea llamada Portuguesa era esencialmente agrícola. El Partido había preparado un informe sobre las posibilidades de desarrollo de esa economía, y empezaba a aplicar las conclusiones de ese informe. Además del cultivo del maní, se desarrollaba el de otras semillas oleaginosas, el de la mandioca y las patatas dulces. Había algunas tiendas populares, donde la población podía procurarse artículos manufacturados en el exterior a cambio de los productos agrícolas de que disponía. Se trataba de un sistema de trueque en que la moneda no intervenía. En cuanto a los objetos manufacturados de primera necesidad, procedían esencialmente de donaciones.

458. Los escolares pondrían en práctica un programa de plantación de árboles. Por otra parte, el Territorio disponía de recursos inexplorados de petróleo y de bauxita. El Partido esperaba contar con la colaboración de otros países y de las Naciones Unidas para aprovechar sus riquezas y elevar así progresivamente el nivel de vida de la población, que a la sazón era sumamente bajo.

459. En contestación a otras preguntas dijo que las represalias de los portugueses revestían principalmente la forma de bombardeos aéreos contra aldeas aisladas, en tanto que en los grandes centros poblados los colonos portugueses siguen deteniendo y torturando a los patriotas. Uno de sus asociados que había estado en el Norte del país haciendo un reportaje para *Jeune Afrique*, había visitado una aldea bombardeada cerca del río Farim después que algunos aviones la habían sobrevolado, y describiría más adelante su experiencia ante el Comité.

460. La moral de las tropas portuguesas era muy baja. Participaban en la guerra porque no sabían cómo salir de ella. Muchos hombres desertaban y se los encontraba con las tropas del ejército de liberación. Recientemente uno de esos desertores había declarado que por lo menos el 60% de los soldados de su cuartel estaban cansados de la guerra y no pedían sino que se terminara. En ese clima los conflictos entre oficiales y soldados eran constantes. Desde hacía por lo menos un año y medio los portugueses se habían puesto a la defensiva. De hecho, sus únicas acciones ofensivas se llevaban a cabo contra la población civil a la que bombardeaban implacablemente. En cambio, el ejército de liberación había emprendido una ofensiva que era constante. Este era el principio mismo de su lucha. Su país lucharía hasta el fin para lograr la independencia.

461. Citó un pasaje de un artículo del periodista portugués Martinho Simões, publicado en *Diário de Notícias* de abril de 1966:

““Dolorosa” es la expresión que define mejor la misión de los hombres que forman parte de los grupos móviles de combate. En efecto, deben hacer frente a las condiciones de vida más duras. Al abrirse el camino por la maleza, desgarrándose las carnes con el áspero *tarrafo* (tamariz), hundiéndose en el lodo que cubre grandes extensiones del territorio de Guinea (muchas veces se ven obligados a avanzar dándose la mano o bien a “nadar” sobre esa materia pegajosa), sólo pueden contar consigo mismos.

“Saben que el enemigo los acecha, escondido en la espesa vegetación. Saben que el ataque se producirá en cualquier momento o, mejor dicho, en las

peores circunstancias: cuando los inmovilice un obstáculo o cuando un contratiempo reduzca la eficacia del dispositivo de seguridad. Saben que si los terroristas deciden pasar a la ofensiva es porque han estimado de antemano que la situación les es favorable, sea por su superioridad numérica, por la cantidad y la calidad de las armas de que disponen, o aun porque ocupan una posición ventajosa. Saben que la emboscada constituye un peligro inminente. Saben que no tendrán un solo minuto de reposo, sea cual fuere la duración de la expedición...

"...Entre tanto, en los cuarteles las guarniciones deben seguir permaneciendo atentas. Los "bandoleiros" son cobardes. Llegan protegidos por el silencio y la oscuridad de la noche, lanzan los artefactos de muerte que los comunistas les suministran en abundancia, y huyen a sus campamentos instalados en los países vecinos."

462. Para completar la información que había suministrado, el peticionario pidió al Comité que escuchara a sus cuatro colaboradores, la Sra. Joyce Lusso, el Sr. Justín Vieyra, el Sr. Isidro Romero y el Sr. Piero Nelli, a quienes había incluido en su solicitud de audiencia (A/AC.109/PET.511 y Add.1) y que describirían su experiencia personal en Guinea. Dos de ellos eran cineastas, uno francés y el otro italiano, y dos eran periodistas italianos.

463. La Sra. Joyce Lusso dijo que recientemente había realizado un viaje por zonas del Sur de la llamada Guinea Portuguesa, interesándole sobre todo la organización civil de la región. La guerra se presentaba en ella como una dolorosa necesidad y, si se tenían en cuenta todas las circunstancias, se desarrollaba en condiciones que permitían abrigar todas las esperanzas. Pero también era necesario crear en esas zonas una sociedad capaz de administrarse a sí misma. Esto era precisamente lo que los portugueses habían impedido hasta la fecha. Los analfabetos que constituían el 99,7% de la población, estaban por este hecho privados de sus derechos cívicos. Según la ley portuguesa, la Guinea no era una colonia sino una provincia cuyos habitantes tenían los mismos derechos que los ciudadanos portugueses, a reserva de que llenasen las condiciones establecidas, cosa que les resultaba absolutamente imposible. En efecto, para ser elector todo ciudadano de Guinea debía conocer el portugués, estar al tanto de las costumbres y la civilización portuguesa y ofrecer garantías de carácter económico. De esa manera, la inmensa mayoría de la población estaba en realidad regida por un estatuto colonial que la reducía rápidamente a la esclavitud, puesto que era obligada a aceptar contratos de trabajo intolerables y que, en ciertos casos, podía ser condenada a destierro.

464. El ejército de liberación había logrado, con la ayuda de la población, impedir que las tropas portuguesas entraran en las zonas liberadas. A la Potencia ocupante no le quedaba otro recurso que los bombardeos. De hecho, los aviones de reconocimiento y bombardeo eran las únicas obras de mecanización que el país debía a los portugueses. Ciudades y aldeas enteras eran bombardeadas una o varias veces, y antes que buscar su salvación en la huida la población local se obstinaba en reconstruirlas con admirable tenacidad.

465. La administración de las regiones liberadas se confiaba a dos comités administrativos interregionales, subdivididos en cuatro comités regionales en el Norte

y en seis en el Sur. Las regiones se subdividían en sectores o provincias que agrupaban a cierto número de aldeas o comunas administradas por cinco miembros del Partido y cinco representantes elegidos entre la población. Toda la población, tanto masculina como femenina, participaba en la vida administrativa y en la organización de la producción y de la distribución en cada aldea.

466. En el plano de los comités interregionales y regionales, el personal encargado de la administración era nombrado por el Partido. En el de los sectores y las comunas, ciertos administradores eran designados por el Partido, en tanto que los demás eran elegidos por procedimientos democráticos. Las relaciones entre los servicios administrativos, las fuerzas armadas y el Partido eran extremadamente flexibles. No se producía ninguna cristalización jerárquica, sino más bien una ósmosis constante entre la vida militar y la civil. Se trataba de un hecho sumamente interesante, a cuya realidad hombres y mujeres contribuían por igual. El ejército regular se había formado con la ayuda de países extranjeros, y era complementado por grupos de guerrilleros constituidos en maquis y por milicias populares. La justicia era administrada por comités elegidos democráticamente, salvo en los casos que justificaban la formación de un tribunal de excepción.

467. La economía local seguía siendo de subsistencia, y bastaba para alimentar a la población. Cada comité organizaba el trabajo en común en los territorios de su jurisdicción. En ellos, como en otras partes, las mujeres trabajaban a la par de los hombres.

468. La instrucción, en todos sus niveles, constituía una de las principales preocupaciones de los comités que habían construido especialmente dos escuelas en los bosques para tratar de proteger a los alumnos contra los bombardeos enemigos, pues convenía destacar que los portugueses atacaban los edificios escolares con particular encarnizamiento.

469. La Sra. Lusso había visitado varias escuelas en las regiones liberadas. Las estructuras eran primitivas: techos de follaje y ramas, troncos de árboles a guisa de mesas y bancos. Faltaban manuales escolares. En cambio, la aldea entera participaba de manera extraordinaria en el esfuerzo de alfabetización emprendido. Los maestros eran personas muy jóvenes que habían terminado recientemente sus estudios secundarios y que consagraban dos años a la enseñanza antes de ir a realizar estudios superiores en el extranjero.

470. La Sra. Lusso exhortó a todos a que proporcionaran a esas escuelas rurales material escolar, papel y telas de algodón para confeccionar delantales para los niños.

471. En resumen, dijo que había podido comprobar sobre el terreno que ya estaban echados los cimientos de la sociedad democrática futura, y que esa sociedad se desarrollaba de manera coherente, a base de reciprocidad entre la doctrina y la experiencia.

472. En contestación a una pregunta, la peticionaria dijo que los alimentos no faltaban. La población de las regiones del Sur era laboriosa, y a pesar de la falta de herramientas modernas trabajaba con métodos sumamente evolucionados. Cultivaba el arroz como en Italia y la producción era muy abundante, tanto que permitía acumular existencias en las tiendas populares y en silos. Este arroz podría servir como moneda para el intercambio si la falta de comunicaciones no impidiera

su transporte. El país producía también aceite de maní y de palma. El ganado y las aves de corral abundaban. La población estaba bien nutrida, era fuerte y sana. El Partido planificaba la agricultura para sustituir el sistema de monocultivo, establecido por los portugueses, por una economía de subsistencia.

473. El ejército de liberación disponía de armas más que satisfactorias y sobre todo de baterías antiaéreas, bazookas y morteros muy eficaces, que permitían a los combatientes rechazar los bombarderos enemigos. El ejército estaba muy bien organizado. Estaba íntimamente ligado a la población y no había en él señales de cristalización jerárquica. Los combatientes no tenían grado. No eran profesionales de la guerra. Los oficiales se reclutaban localmente, y el ejército de liberación no contaba con voluntarios extranjeros. Su avance era racional y coherente. Alrededor de las zonas liberadas el ejército popular llevaba la ventaja y los portugueses evitaban los encuentros. Las bases portuguesas habían sido reforzadas, pero se hallaban aisladas y sin comunicaciones, aunque se les llevaban suministros en helicóptero. El ejército regular, con ayuda de las acciones de vanguardia llevadas a cabo por los guerrilleros, hacía frecuentes incursiones en territorio enemigo. No debía olvidarse que la guerra había comenzado hacía sólo cuatro años. Pronto el ejército de liberación proseguiría su avance para apoderarse de las grandes ciudades, lo que plantearía no sólo problemas militares sino también problemas políticos a cuya solución deberían contribuir todas las fuerzas de la democracia.

474. El Sr. Justín Vieyra declaró que había pasado tres días — del 5 al 8 de junio último — entre los maquis de Guinea. El 5 de junio, hacia las cinco de la mañana, en momentos en que se encontraba en compañía de jefes de los maquis, su camarada Nino le había indicado que echase a correr y luego que se arrojara entre la hierba para escapar a los aviones. Su terror había sido tan intenso que no había podido contar más que cuatro aparatos de bombardeo, aunque seguramente su número era mayor. Una hora más tarde había entrado en la aldea bombardeada, donde había visto siete muertos o moribundos, uno de éstos con las entrañas abiertas. Había visto también el cadáver de un niño de cuatro años, el de una muchacha, etc., y la aldea devastada por los bombardeos, pues los aviones habían vuelto a atacar repetidas veces. Cuando se encontraba junto al río, al descubierto, había visto que dos aviones a chorro ametrallaban a la aldea bombardeada. Al día siguiente, la misma aldea había sido saqueada.

475. Lo que más le había impresionado durante los cuatro días que había pasado en el Territorio de Guinea, habían sido las atrocidades. El orador se dirigió a los africanos que ignoraban que la guerra estaba a sus puertas. Bastaría con un error para que Dakar o cualquier otro de los centros de Guinea sufriesen la misma suerte que la aldea sacrificada por la cual había pasado. Convenía señalar sobre todo que los portugueses no atacaban a los soldados, sino a la población civil de las aldeas, lo que demostraba la atrocidad de esta guerra inhumana.

476. El Sr. Isidro Romero, cineasta francés, dijo que había recorrido la Guinea por el Norte y el Sur. En el Sur del Territorio había podido hacer tomas cinematográficas interesantes. El grupo de que formaba parte aguardaba a una columna que venía a buscar armas. Dicha columna había llegado trayendo en parihuelas a dos heridos — un hombre y un niño — que

eran los únicos sobrevivientes de una aldea atacada por los portugueses. El niño había intentado huir pero había sido abatido de un balazo en el talón, por lo cual un oficial portugués se le había acercado para darle lo que creía que era el golpe de gracia. Tras perforar la oreja del niño, la bala homicida le había deshecho el carrillo, pero desgraciadamente para los portugueses el niño había sobrevivido para dar testimonio de esas atrocidades. La película que se proyectaría ante el Comité ilustraba este relato.

477. Recordó el caso del herido que había visto junto al niño del que ya había hablado. Era un hombre de edad madura, cuya pierna había sido acribillada de esquirlas de bazooka 10 días antes. Como el ejército de liberación no disponía de suero contra la gangrena, la pierna de este hombre se iba descomponiendo lentamente y en la herida se veían enormes gusanos. Los miembros del Comité Especial podrían ver en la película que se les exhibiría escenas difícilmente soportables, que ilustraban en forma dramática la escasez de medicamentos que sufrían los combatientes.

478. En su carácter de cineasta, había participado en una emboscada organizada por un destacamento del ejército de liberación, que había lanzado un ataque contra la ciudad portuguesa de Mançoa. El destacamento había tomado un camino que en ese momento reparaban obreros africanos bajo la vigilancia de los portugueses. Había atacado hacia las 13 horas a los camiones que traían a las tropas portuguesas a su acantonamiento, y había incendiado 11 camiones y dos vehículos armados con ametralladoras del enemigo. Naturalmente, no había atacado al vehículo que transportaba a los obreros africanos.

479. El Sr. Piero Nelli, cineasta italiano, dijo que él y su equipo habían hecho su primera escala en una aldea bombardeada por los portugueses inmediatamente después de su partida. El bombardeo había causado cierto número de muertos, entre los cuales se contaban cinco muchachas. En su marcha hacia el Norte, el equipo había pasado por otra aldea completamente destruida por los portugueses. Mientras hacían algunas tomas cinematográficas habían visto a unos aviones que bombardeaban una tercera aldea situada a algunos kilómetros y habían podido filmar ese bombardeo. En seguida el equipo se había dirigido al cuartel general del ejército del Norte, donde había visitado los hospitales de campaña que auxiliaban a los guerrilleros heridos. Era cierto que el espectáculo de los soldados heridos en acción de guerra le había impresionado mucho menos que el del asesinato deliberado de mujeres y niños inocentes, por implacables que fueran las leyes de la guerra.

480. Al describir las películas que se proyectaron ante el Comité y que habían sido tomadas durante los quince días que había pasado con los maquis, el señor Nelli dijo que había podido hacer tomas cinematográficas en un hospital de campaña del Norte, donde se atendía sobre todo a heridos de guerra. Había visto allí cosas extraordinarias: la mañana se dedicaba a los cuidados habituales que habían de darse a los heridos, a las inyecciones, curaciones, etc. Luego, jóvenes alumnas de enfermería asistían por rotación a cursos de dos horas que comprendían no sólo la atención de los enfermos y los primeros auxilios, sino también la terapéutica general. Por ejemplo, el Sr. Nelli había asistido a una exposición clínica sobre la angina de pecho. En la noche del 2 al 3 de febrero de 1966, inmediatamente después de haber cruzado la frontera que separaba al Senegal

de la Guinea llamada Portuguesa, había visto una escuela instalada en un bosque, donde un muchacho de 16 años enseñaba a leer al mismo tiempo a soldados y a niños.

481. Las aspiraciones de la población habían sido expresadas en términos muy simples y muy ingenuos por una campesina durante una reunión organizada en el cuartel general del ejército de liberación de Guinea instalado en el Norte: "Queremos abrir en el Norte del país tiendas populares donde puedan efectuarse compras mediante el intercambio en especie. Queremos que nuestros hombres vuelvan a trabajar la tierra. Queremos que la guerra termine, pero queremos también ganarla porque esta guerra es justa, porque nos ha dado hospitales, escuelas y libertad, y porque nos devuelve la tierra que nos pertenece".

482. En contestación a una pregunta sobre la moral de las tropas portuguesas, relató dos episodios a los que había asistido personalmente. En primer lugar, había participado en los combates realizados cerca de Mansoa, donde el ejército de Guinea había tendido una emboscada a las tropas portuguesas. Cuando esas tropas habían llegado, todo el fuego de sus armas pesadas se había concentrado en el destacamento del ejército de liberación que les hacía frente, pero se habían limitado a permanecer a la defensiva. Unos 30 combatientes del ejército de liberación habían asaltado a 100 hombres, cuatro camiones blindados y dos tanques. Habían destruido dos camiones y habían puesto de 30 a 40 hombres fuera de combate. Si los portugueses no habían contraatacado había sido porque no estaban seguros de la moral de sus tropas. En segundo lugar, había visto que tropas portuguesas desembarcaban en Farim para embarcarse en una cañonera guiada por un helicóptero. Los soldados buscaban su camino en la maleza, haciendo fuego al azar. Avanzaban en desorden, pero en ningún momento habían tratado de atacar.

483. En contestación a nuevas preguntas, el petionario, Sr. Cabral, dijo que la cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa debía plantearse al Consejo de Seguridad, y que los organismos especializados de las Naciones Unidas debían ayudar a los movimientos nacionalistas de liberación. En efecto, para que las resoluciones resultaran verdaderamente eficaces, era necesario que el Consejo de Seguridad declarara obligatorias las sanciones contra Portugal y declarara el embargo del suministro de armas. También era necesario que se reconociera que los movimientos nacionalistas creaban las condiciones necesarias para la aplicación de los principios de la Carta y de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los de libre determinación e independencia. En cuanto a la ayuda del UNICEF y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de organismos especializados, como la UNESCO y la OMS, podría darse por intermedio de lo CONCP.

484. Los diversos movimientos nacionalistas ya estaban preparándose para asumir las responsabilidades de gobierno después de la independencia. En Guinea y Cabo Verde se cumplía una nueva experiencia. Había que planificar gradualmente, teniendo en cuenta la situación económica, social y cultural de la región. Aunque hubieran quedado liberadas zonas muy extensas, no se trataba por entonces de establecer un gobierno provisional; sin embargo, en todas las regiones liberadas se creaban órganos administrativos, a los que se separaba gradualmente de las estructuras del partido. Citó,

por ejemplo, la constitución de un servicio de registro del estado civil, y de servicios sanitarios y la previsión de un censo que se levantaría este año. Todos los jefes de la lucha y todos los que tenían capacitación se dedicaban a estudios económicos, sociales y culturales, a fin de poder asumir todas las responsabilidades después de la independencia.

485. En los distintos territorios los patriotas habían comenzado a tener conciencia de su situación de hombres y de africanos a partir de 1950. Lo primero que habían hecho había sido constituir un movimiento de conjunto para la lucha común. A partir de 1956 se habían constituido organismos nacionales en cada territorio. En 1961 se había celebrado en Casablanca la primera conferencia de nacionalistas, a raíz de la cual se había constituido una secretaría. La segunda conferencia, que se había realizado en 1965, en Dar es Salaam, había permitido echar las bases concretas de coordinación en lo político y militar, con objeto de reconstruir el país. En aquella conferencia se había decidido, principalmente, que en lo futuro una sola persona representaría a los territorios portugueses en las conferencias internacionales. En Brazzaville se realizaría próximamente otra conferencia a fin de consolidar esa coordinación. Había una comisión militar que se ocupaba de coordinar las actividades militares en diversos países y una comisión social que se ocupaba de cuestiones de enseñanza y asistencia sanitaria. Había, además, un programa común para escuelas de enseñanza primaria. Se habían constituido otros organismos para facilitar el intercambio de experiencia, pues la lucha era la misma para todos; cada nacionalista tenía conciencia de su condición de africano y de que luchaba por la liberación de su país y de su pueblo.

486. La implantación de un régimen fascista en Sudáfrica y en Rhodesia del Sur no sólo preocupaba a los territorios portugueses sino también a todos los Estados de Africa y a los Estados del mundo entero amantes de la paz y de la libertad. Había unas consecuencias subjetivas y otras objetivas. Desde el punto de vista subjetivo, el desarrollo impune de un régimen racista en Africa consolidaba las esperanzas, ilusiones y maniobras de los colonialistas portugueses. Desde el punto de vista objetivo, se advertía que Portugal, Rhodesia del Sur y Sudáfrica tomaban medidas concretas para hacer objeto de persecuciones, detenciones y matanzas en masa a las poblaciones africanas. En Guinea, por ejemplo, Portugal, de acuerdo con Sudáfrica, construía en una isla un gran aeropuerto con objeto de que este último reemplazara a los aeropuertos africanos que se le impedía utilizar. Gracias a ese aeropuerto, Portugal dispondría también de una base segura para bombardear a la población de las islas de Cabo Verde y de Guinea.

487. Al cabo de tres años de lucha el pueblo había descubierto el secreto de la guerra colonial que libraba Portugal, país pobre y atrasado. Portugal, en efecto, utilizaba armas norteamericanas, como decía un periodista en *The Washington Post*. El pueblo había advertido que Portugal recibía aviones, bombas de napalm y armas automáticas de sus aliados de la OTAN. Los Estados miembros de la OTAN contestaban que no autorizaban a Portugal a emplear estas armas. ¿Pero cómo cabía esperar que un loco dispuesto a matar no utilizara el cuchillo que se le daba? El Sr. Cabral subrayó también que la Compañía ESSO había renovado un contrato con Portugal. Al principio de la guerra de li-

beración se había despedido a los técnicos de la Compañía, pero después de tres años de lucha, y en momentos en que se había advertido que ésta iba a continuar, la Compañía norteamericana había concertado un nuevo contrato. El Sr. Cabral había preguntado por qué a un representante de la Embajada de los Estados Unidos en Conakry, quien le había contestado que, sin duda, a la Compañía le importaba mantener el primer lugar. El Sr. Cabral subrayó que en la situación del momento ese acto se consideraba inamistoso, puesto que permitía a Portugal disponer de fondos más importantes para continuar su lucha.

488. En cuanto a la noticia de que la República Federal de Alemania había suministrado a Portugal aviones italianos "Fiat", el peticionario dijo que ello se debía a que, dentro del régimen del Mercado Común y de los acuerdos de Italia y de la República Federal, se montaban aviones "Fiat" en esa República. En Guinea actuaban 20 de esos aviones. De ahí que aviones concebidos por cerebros italianos y contruidos por brazos alemanes se entregasen para ser utilizados en territorios bajo dominación portuguesa para exterminar a la población, que sólo anhelaba construir su país en paz, como el pueblo italiano.

489. Además de los aviones y armas de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos se habían encontrado otras armas, como ametralladoras y granadas, por ejemplo, que se fabricaban en Italia y Bélgica. Además, estaba casi seguro de que los helicópteros que se utilizaban en Guinea eran "Alouettes", de fabricación francesa.

490. Hasta hacía cuatro meses los efectivos portugueses en el Territorio ascendían a unos 20.000 hombres, pero Portugal, después de las cuantiosas bajas que había sufrido, los había aumentado a 25.000. No sabía si entre ellos se encontraban mercenarios. Por lo que se refiere a la aviación, había en Bissau técnicos ocultos en una villa bastante alejada de la población, que probablemente no eran portugueses porque no tenían tipo de tales ni hablaban ese idioma. Ignoraba la nacionalidad de aquéllos, pero suponía que se trataba de sudafricanos. Era probable que los países que suministraban aviones a Portugal también le enviaban técnicos para que cuidaran los aparatos.

491. Los portugueses habían violado en varias ocasiones el espacio aéreo de Guinea y Senegal, y estos dos países habían formulado varias quejas en el Consejo de Seguridad por violación de sus fronteras. Esas violaciones eran frecuentes. El mes precedente, el 6 de mayo de 1966, salvo error, los portugueses habían atravesado la frontera guineana para ir a quemar una aldea y capturar a los jefes de ésta, porque las fuerzas nacionalistas habían atacado con morteros un cuartel portugués situado en Baruntuma. Había habido después un tiroteo entre tropas portuguesas y guineas, pero Guinea no había planteado este incidente en el Consejo de Seguridad porque consideraba que formaba parte de la lucha cotidiana. Señaló también que, al parecer, aviones portugueses habían sido derribados en el Congo, Brazzaville. Asimismo, tropas portuguesas habían atravesado muchas veces la frontera senegalesa para ir a quemar aldeas.

492. Contestando una pregunta sobre los armamentos que utilizaba su movimiento, dijo que toda lucha de liberación nacional tenía sus propias leyes. El armamento utilizado debía corresponder a las necesidades

reales de esa lucha. Al principio, los combatientes no disponían más que de armas tradicionales y primitivas, de lanzas y pistolas. Después, habían logrado obtener fusiles, metralletas e incluso pequeños cañones. Se necesitarían aviones y armas perfeccionadas, pero también habría que tener un personal técnico capaz de utilizarlas. Las fuerzas nacionalistas habían capturado algunos tanques, pero no los conservaban, pues no podrían utilizarlos. Los destruían por minas o con bazookas. Esos tanques solían ser de origen americano o bien de la República Federal de Alemania. En la lucha cotidiana que libraban los combatientes, era el hombre el que contaba ante todo, y eran muchos los que estaban dispuestos a sacrificar su vida por el triunfo de su causa.

493. El sistema de justicia colonial en el Territorio era el mismo que en todos los países coloniales. Se consideraba a Guinea como una *comarca* — que era una de las divisiones judiciales portuguesas — dependiente del centro de Lisboa. Había una justicia para europeos y *assimilados* y otra para los autóctonos. En cuanto a estos últimos, el delegado comarcal les aplicaba justicia sumaria. Se los detenía sin que tuvieran posibilidad de defenderse y su suerte dependía del arbitrio de este jefe comarcal. Por lo general, se los condenaba a prisión, a penas corporales o a trabajos forzados. El señor Cabral sugirió al representante de Sierra Leona que, para obtener informaciones más amplias sobre esta cuestión, consultara el informe que se había presentado en Conakry al Comité Especial en 1962. En ese informe, que se titulaba "El pueblo de la Guinea llamada Portuguesa ante las Naciones Unidas", había detalles muy exactos sobre la forma en que se administraba justicia en el territorio.

494. El PAIGC no consideraba que hubiera verdaderamente representantes guineos en la Asamblea Nacional portuguesa. El propio Gobierno portugués elegía a los representantes de la Guinea llamada Portuguesa para poder decir que había representantes de ese país en la Asamblea Nacional. Había a la sazón cuatro supuestos guineos entre los miembros de esa Asamblea, pero sólo uno de ellos era un verdadero hijo de la Guinea, y el partido del Sr. Cabral lo consideraba un traidor. En la Guinea llamada Portuguesa no había verdaderas elecciones.

495. En cuanto a la actitud del PAIGC si el señor Salazar dejase el poder y después cambiase la política colonial de Portugal y fuese favorable a la independencia de la Guinea llamada Guinea Portuguesa, el peticionario dijo que su partido no luchaba contra el pueblo portugués, sino contra el régimen fascista de Salazar. No era seguro que la desaparición de ese régimen entrañara necesariamente un cambio de actitud por parte del Gobierno portugués. Sin embargo, si así ocurriese, el partido africano para la independencia de Guinea y del Cabo Verde estaría dispuesto a colaborar con el régimen portugués en la medida en que este último hiciese justicia a sus justas reivindicaciones. Los guineos no querían la guerra; se habían visto obligados a batirse contra su propia voluntad.

496. El PAIGC estaba tratando de difundir la idea de la libertad entre los soldados portugueses, a fin de que pudieran valorar el movimiento de liberación y, por último, desertar y alistarse en sus filas, y había obtenido ya ciertos resultados. En efecto, muchos de los soldados portugueses eran analfabetos y no comprendían nada de la lucha que se les obligaba a librar. Por-

tugal trataba de mantenerlos en la ignorancia a fin de evitar que se sublevaran. El comisario político del ejército nacionalista había preparado para los soldados portugueses volantes que debían ser colocados en el camino por donde iban a pasar esos soldados. Sin embargo, en dichos volantes no se ponían jamás palabras de odio contra los portugueses. En el norte del país se habían dejado volantes en que se incitaba a los soldados portugueses a desertar.

497. Un desertor portugués, de 20 años de edad, que lleva diez meses en Guinea, al ser preguntado si sabía por qué hacía la guerra, había respondido que los oficiales portugueses decían a sus tropas que debían ir a dispersar bandidos. El desertor había declarado, además, que la salida de su cuartel estaba vigilada, y que los soldados se hallaban muy mal abastecidos. Al preguntársele si pensaba que los nacionalistas tenían alguna posibilidad de ganar la guerra, el soldado había respondido afirmativamente, observando que los portugueses no conocían bien el terreno y que por ello ponían siempre al frente a los africanos enrolados en su ejército.

Audiencia de peticionarios en relación con Santo Tomé y Príncipe

498. El Sr. Medeiros, hablando en nombre del Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP), dijo que el hecho de que, en su última etapa, el Comité Especial hubiese incluido en su programa la cuestión de los territorios portugueses significaba que la lucha de esos pueblos había llegado a ser uno de los acontecimientos más importantes del continente africano.

499. Este acontecimiento sin precedentes en la historia del colonialismo portugués demostraba que, en las condiciones del momento, el pueblo de Santo Tomé y Príncipe, prescindiendo de su situación geográfica, de las dimensiones del Territorio y del número de sus habitantes, estaba decidido a liquidar completamente la dominación colonial.

500. El Sr. Medeiros se sentía especialmente complacido al ver en el Comité Especial a delegados que representaban a los pueblos de África, Asia y América Latina que libraban, en condiciones igualmente difíciles, una lucha por la consolidación de su independencia política y económica.

501. Habían pasado tres años desde que el representante de Santo Tomé y Príncipe había tenido por última vez contacto con la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas.

502. El análisis de los diversos problemas que la presencia portuguesa creaba en el país revelaba que las relaciones entre colonizador y colonizados continuaban dominadas por un sistema según el cual el colonizador era propietario de la tierra y el negro simple instrumento de producción.

503. Si bien la *roça* (vasta propiedad agrícola) continuaba siendo el núcleo de la vida agraria de la isla, que dependía de la explotación de la producción agrícola, su fisonomía había experimentado importantes cambios y tendía a concentrar todo el poder económico en dos grandes monopolios portugueses: el Banco Nacional Ultramarino y la Companhia União Fabril.

504. Estas vastas propiedades agrícolas representaban el 93% de la superficie cultivable y su configu-

ración interna daba al archipiélago el aspecto de una serie de "micro-estados", en el cual la periferia estaba ocupada por la población autóctona. Sus actividades económicas eran muy limitadas. Consistían en la agricultura de subsistencia practicada en una zona regional que representaba el 7% de la superficie cultivable y ocupaba al 52% de la población del archipiélago.

505. El ingreso nacional anual por habitante en Santo Tomé y Príncipe era de unos 25 dólares. El nivel de vida de la población era uno de los más bajos del mundo, y la tasa de mortalidad infantil se elevaba al 42 por mil. Por otra parte, las enfermedades tropicales, el analfabetismo — que llegaba al 85% — y la subalimentación eran corrientes. Por ello el conflicto se volvía cada día más agudo, debido a la escasez de mano de obra.

506. La aparición de una conciencia revolucionaria, resultado de las condiciones en que se había impuesto la presencia portuguesa (colonización, esclavitud, opresión, resistencia a la opresión) y la acción paciente del Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe habían llevado a Portugal a reforzar su dispositivo bélico: se había instalado toda una maquinaria de guerra que se perfeccionaba para cortar de raíz las aspiraciones del pueblo de Santo Tomé y Príncipe a la independencia.

507. En diciembre de 1965, se había detenido a un grupo de 17 patriotas de Santo Tomé, entre los cuales se contaba la conocida poetisa Alda de Espírito Santo.

508. La PIDE (policía política) había empleado contra ellos los tradicionales métodos de tortura. En particular, el joven estudiante Antonio Lomba había tenido que ser internado en la clínica psiquiátrica debido a los malos tratos recibidos.

509. Existía el peligro de perder de vista la perspectiva histórica y la importancia de la lucha del pueblo de Santo Tomé y Príncipe si se consideraba tan sólo su extensión geográfica. Aunque en el pasado, debido a su situación geográfica, las islas de Santo Tomé y Príncipe habían funcionado como depósito de esclavos, en vista de la constante evolución de las luchas de liberación en Angola y Mozambique, el archipiélago se iba transformando en una base militar contra los movimientos nacionalistas de esos países, así como el de Santo Tomé y Príncipe.

510. El archipiélago tenía importancia para las comunicaciones aéreas entre Portugal y sus territorios, especialmente después de que los países africanos independientes habían cerrado sus puertos y aeropuertos a los colonialistas portugueses.

511. El archipiélago funcionaba como base de apoyo y de aprovisionamiento de los aviones que iban de Lisboa a Angola y Mozambique. Por otra parte, la lucha de las Potencias imperialistas en pro de la reconquista de África había convertido al archipiélago en una base de apoyo para futuras operaciones punitivas contra los países vecinos. Por ello los militaristas y "revanchistas" de Bonn pensaban en la creación de una base militar en la isla de Santo Tomé.

512. Por esta razón el aeropuerto de Santo Tomé había sido acondicionado para las nuevas necesidades militares. Como consecuencia de las obras, Angola y Mozambique tenían que contribuir cada uno con 1.700.000 escudos, y Santo Tomé con 600.000 escudos al presupuesto de funcionamiento del aeropuerto, conforme al decreto 45.745 de 1º de junio de 1965.

513. La lucha armada se imponía como única solución al conflicto colonial en Santo Tomé y Príncipe, y el Comité de Libertação tenía plena conciencia de los riesgos que entrañaba esta solución. La actitud de Portugal frente a los pueblos del archipiélago, como frente a los Estados africanos vecinos, exigía que el Gobierno portugués fuera considerado como agresor. Era preciso que en estas circunstancias el Consejo de Seguridad aplicara sanciones obligatorias a Portugal y en especial que decretara el embargo sobre las armas y el material bélico.

514. El Sr. Medeiros observaba complacido que esta y otras cuestiones, planteadas por el grupo de representantes de los pueblos de los territorios portugueses, habían sido mencionadas en los proyectos de resolución del Comité Especial (A/AC.109/L.315 y A/AC.109/L.313).

515. El pueblo de Santo Tomé y Príncipe vivía desde hacía cinco siglos bajo el peso de la dominación colonial portuguesa, y la historia de su lucha demostraba que la descolonización sólo podía lograrse si en ello se empeñaba la voluntad de un pueblo, guiada únicamente por ideales revolucionarios.

516. Para concluir, el peticionario rindió un ferviente homenaje al pueblo argelino, cuya lucha de liberación era una lección para todos y parte del patrimonio de toda la humanidad progresista.

Audiencia de un peticionario en relación con los Territorios bajo administración portuguesa

517. El Sr. de Andrade, hablando en nombre de la Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) declaró que el establecimiento del Comité de descolonización marcaba la culminación de la larga lucha sostenida en las Naciones Unidas para poner fin al colonialismo, una de cuyas etapas más significativas había sido la aprobación de la resolución 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

518. En una época los numerosos conflictos en los cuales estaban empeñados las grandes Potencias imperialistas apagaban el eco de las violencias practicadas por la administración colonial. El mundo entero sabía ya que Portugal explotaba sus colonias y se oponía en ellas a las reivindicaciones y aspiraciones de los pueblos autóctonos. Los informes de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas no pintaban un "oasis de paz lusitana", sino un palenque de guerras de liberación nacional.

519. El espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas daban fundamento jurídico y garantía moral a la guerra de liberación emprendida por los pueblos de las colonias portuguesas. La resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965 reconocía, en efecto, la legitimidad del recurso a los medios empleados para hacer triunfar el derecho a la libre determinación y la independencia. Por este motivo, uno de los dirigentes de los movimientos nacionalistas había afirmado, a justo título, que quienes luchaban eran combatientes anónimos de las Naciones Unidas. Para hacer frente a esta guerra justa y popular, Portugal se beneficiaba de la complicidad y del apoyo diplomático, militar y económico de los Estados miembros de la OTAN. Estos Estados procedían en contra de los principios de la Carta de la cual eran signatarios.

520. La Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas se definía como un frente unitario de combate para poner fin al colonialismo portugués. La Conferencia se debía a la necesidad de coordinar los esfuerzos de las diversas organizaciones existentes a fin de poder alcanzar su objetivo inmediato: la conquista de la independencia nacional. En diciembre de 1965, la Conferencia había procedido a un reajuste a fin de coordinar mejor la acción político-militar de los movimientos nacionalistas que agrupaba. La Conferencia desempeñaba el papel de agente catalizador de las fuerzas populares y organizaba una acción concertada en la esfera internacional. Desde la reunión constitutiva en abril de 1961 en Casablanca, la CONCP no había cesado de presentar su causa ante las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana y los Estados africanos. La Conferencia había emprendido gestiones encaminadas al boicoteo económico y diplomático de Portugal. La Asamblea General, al aprobar su resolución 1514 (XV) había colocado el problema de la liquidación del colonialismo en un nuevo contexto y había abierto grandes perspectivas a la acción internacional que realizasen los movimientos nacionalistas. La misión de la CONCP, que se había trasladado a Nueva York en noviembre de 1965, había formulado ante la Cuarta Comisión propuestas concretas cuyo espíritu, si no la letra, se encontraba en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su último período de sesiones.

521. El movimiento de liberación nacional de las colonias portuguesas había tenido siempre un doble objetivo. Por una parte, trataba de destruir la estructura colonial portuguesa y controlar eficazmente las inmensas regiones de Angola, Mozambique y Guinea; por otra, procedía a una reconstrucción nacional en todos los aspectos de la vida política, administrativa, económica, social y cultural. Allí donde el terror y la arbitrariedad, la ignorancia y la enfermedad hacían antes estragos, reinaba a la sazón la democracia inherente a la naturaleza de los movimientos nacionalistas e instalaba escuelas y centros sanitarios. Este factor introducía un nuevo elemento en la empresa de descolonización. Desde el momento en que el recurso a la lucha armada parecía ser el único medio posible de obtener el derecho a la libre determinación, los movimientos nacionalistas habían tenido que modificar la orientación de sus esfuerzos. Era necesario en efecto que la descolonización impidiera a Portugal cualquier posibilidad de restablecer otro tipo de dominación después de alcanzada la independencia. Convenía observar al respecto que el Gobierno de Portugal no había sido nunca partidario de una solución negociada del problema de sus colonias a base del derecho a la libre determinación. Se había probado ampliamente que Portugal no reconocía el principio de la primacía de los intereses de los habitantes de los territorios sometidos a su dominación; los movimientos nacionalistas se habían visto por lo tanto obligados a asumir la responsabilidad de administrar ellos mismos a las poblaciones en guerra. Los movimientos de liberación desempeñaban en este campo un papel pacífico; respetaban la cultura de los habitantes y les aseguraban su progreso político, económico y social. Las consecuencias internacionales de esta situación eran evidentes. Al hablar el lenguaje de la justicia, del derecho, de la democracia y la cultura, los movimientos de liberación contribuían a afirmar la paz y la seguridad internacionales. A la luz de estos nuevos datos sobre la situación de las zonas liberadas,

el Capítulo XI de la Carta relativo a los territorios no autónomos y en particular el Artículo 73 no parecían tener más sentido.

522. El Sr. de Andrade se felicitó de los esfuerzos realizados por el Alto Comisionado para los Refugiados. Esta cuestión era suficientemente importante para hacerla objeto de un seminario en el cual podrían participar los dirigentes de los movimientos nacionalistas.

523. La CONCP, actuando en nombre del Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, de la organización Frente de Libertação de Moçambique, del Movimento Popuar de Libertação de Angola y del Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, estimó que la cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa no sólo debiera figurar en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, sino que también debiera ser sometido al Consejo de Seguridad. La aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales sólo podía tener sentido si el Comité Especial tomase en cuenta la nueva situación creada por los movimientos nacionalistas que ya controlaban inmensas regiones. Conforme al espíritu y letra del párrafo 10 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX), aprobada por la Asamblea General, los movimientos nacionalistas se sentían autorizados para recomendar al Comité Especial que determinara, en conformidad con los movimientos de liberación nacional, las formas de ayuda prioritaria a los pueblos que luchaban. Aunque la ayuda concreta que pudieran suministrar los organismos interesados a los movimientos nacionalistas debería ser tema de debate, él estimaba que la ayuda más eficaz sería sin duda la relativa a la educación, que suministrarían la UNESCO y el Alto Comisionado para los Refugiados. En ese sentido, esperaba que el Comité haría suya la idea de organizar un seminario sobre el problema de los refugiados. Algunos países africanos acogían a los nacionales de los países que luchaban contra Portugal y a los refugiados. Convendría que los movimientos nacionalistas y la CONCP participaran en la organización del seminario y contribuyesen proporcionándole información.

524. Por otra parte, según lo dispuesto en el párrafo 11 de la parte dispositiva de esa resolución, estimaba que el Comité debería recomendar la expulsión de Portugal de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas.

525. Las Naciones Unidas, y en particular el Comité Especial, habían despertado inmensas esperanzas entre los pueblos bajo administración portuguesa y habían creado un ambiente de confianza entre los dirigentes de los movimientos políticos. Al dirigirse al Comité, la CONCP se había inspirado en el deseo de contribuir modestamente al fomento de la paz, la justicia y la cooperación internacionales en el mundo.

526. En contestación a una pregunta, el peticionario dijo que la CONCP, que comprendía las organizaciones que había citado anteriormente, se había establecido en abril de 1961, dos meses después de desencadenarse la lucha armada en Angola. La Union des populations de l'Angola no formaba parte del organismo unitario, aunque se le había invitado a la reunión constitutiva de la CONCP celebrada en abril de 1961. La Unión había respondido en esa época que le era materialmente imposible enviar un representante a Casablanca. La CONCP había reiterado su llamamiento y declarado que

estaba dispuesta a acoger todo movimiento que luchara por objetivos definidos.

527. La CONCP era el órgano catalizador de las fuerzas populares y su papel consistía en coordinar toda acción político-militar para acelerar la derrota del enemigo. Cada organización nacionalista debía aportar una contribución. Al frente de la CONCP, se hallaba la Conferencia que se reunía cada dos años. Entre las reuniones de la Conferencia, el Consejo Directivo, que agrupaba a los dirigentes de los cuatro partidos políticos miembros de la CONCP, se encargaba de interpretar las resoluciones de la Conferencia y de hacerlas ejecutar. El órgano ejecutivo que desempeñaba el papel de secretaría permanente comprendía cuatro departamentos dirigidos por funcionarios procedentes de los movimientos nacionalistas. La CONCP disponía de sus propias fuentes de información. Había elaborado un programa de acción aprobado por el Consejo, que comprendía dos partes; la primera trataba de la lucha político-militar; la segunda de la reconstrucción nacional. El fomento de la reconstrucción nacional había sido confiado a un comité especial para la educación y la cultura, que actuaba en las zonas sometidas a la administración colonial y en las regiones limítrofes que acogían los movimientos nacionalistas.

528. Muchas regiones ya se encontraban bajo el control del movimiento nacionalista; en Cabinda, por ejemplo, la zona controlada representaba el 30% del Territorio. La administración establecida en esas regiones correspondía a la estructura de los partidos.

529. Para dar a conocer su labor, la Conferencia había elaborado un plan de acción y propaganda. El Consejo Directivo estaba reforzando la secretaría permanente, que dispondría de un departamento de información suficientemente importante como para abarcar las diversas regiones. Como los movimientos nacionalistas tropezaban con dificultades en cuanto a sus servicios informativos, sobre todo en los países que les eran hostiles, el departamento de información y propaganda iba a intentar que en América Latina e inclusive en los países occidentales lo representarían los diversos comités de apoyo de los movimientos nacionalistas.

530. El peticionario dijo que, en su opinión, no era cierto que las sanciones perjudicarían sobre todo a los africanos, y estimó que debía continuarse la política de sanciones contra Portugal. Se congratuló de los esfuerzos realizados por el Comité Especial y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas amantes de la paz a fin de que las sanciones contra Portugal y el boicoteo comercial y político contra ese país llegaran a ser una realidad. En cuanto al párrafo 7 de la resolución 2107 (XX), se habían hecho gestiones ante los Estados africanos que estaban en mejor situación de responder favorablemente. Era alentador comprobar que numerosas recomendaciones dirigidas a la Cuarta Comisión habían sido incluidas en los proyectos de resolución presentados a la Asamblea General. Además, con respecto al boicoteo comercial, era evidente que el papel de las grandes Potencias occidentales era decisivo. El boicoteo estaba vinculado a la alianza entre Portugal y sus asociados dentro de la OTAN. Este importantísimo problema podría examinarse de nuevo no sólo en la Asamblea General sino también en el Consejo de Seguridad.

531. Aun cuando los Estados Unidos y otras Potencias occidentales habían rechazado las afirmaciones

de que estaban prestando ayuda a Portugal por medio de la OTAN, había numerosas pruebas de esa ayuda, sobre todo equipo y pertrechos militares tomados por los combatientes de los movimientos nacionales. Estas pruebas no requerían comentario alguno. Los demás peticionarios de los movimientos nacionalistas que vivían en el maquis aportarían pruebas materiales. Esos movimientos habían hecho varios informes sobre este punto. Era notorio que se enviaban a Portugal instructores alemanes, dentro del marco de la cooperación entre Portugal y la República Federal de Alemania.

532. La República Federal de Alemania suministraba a Portugal ayuda militar, política y económica. El pacto entre la República Federal de Alemania y Portugal mostraba que el espíritu fascista que reinaba todavía en ese país concordaba con la tendencia fascista del Gobierno portugués. No era fácil resolver ese problema sino intensificando la lucha que permitiera a la larga romper la alianza entre la República Federal de Alemania y Portugal.

533. En contestación a una pregunta, dijo que él no tenía cifras exactas de los préstamos e inversiones de la República Federal de Alemania. Sin embargo, los representantes de los movimientos nacionalistas — que poseían documentación a ese respecto — se las comunicarían gustosos. Aseguró al Comité que en breve plazo tendría conocimiento de dichos documentos.

534. Resumiendo la posición de la CONCP, dijo que deseaba que el Consejo de Seguridad continuara ocupándose de la cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa, porque la actitud de Portugal era una amenaza a la paz internacional. Por ser el Consejo de Seguridad la única instancia internacional capaz de adoptar resoluciones de carácter obligatorio, a él incumbía ocuparse de esta cuestión y decidir, en su caso, expulsar a Portugal de las Naciones Unidas. El segundo punto de las reivindicaciones presentadas se refería a la evolución de los conflictos que enfrentaban a la CONCP con la Potencia administradora. Eran los movimientos nacionalistas los que debían dirigir la empresa descolonizadora; para ello necesitaban la ayuda de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. La CONCP creía que la asistencia que en virtud de las resoluciones de la Organización habría que rehusar a Portugal debiera transferirse lógicamente a los movimientos de liberación.

Declaraciones generales de los miembros

535. El representante de Etiopía dijo que el problema que planteaba la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa nunca había sido, ni sería, de falta de claridad en los objetivos e intenciones de los interesados, sino que estribaba en la falta de rigor de las medidas adoptadas para que Portugal se diera cuenta de su locura y respondiera favorablemente a las demandas de la población autóctona de sus territorios y de la opinión del mundo civilizado.

536. Las condiciones en que vivían los millones de infortunados hermanos africanos de Angola, Mozambique, la llamada Guinea Portuguesa y otros territorios que gemían bajo el yugo de la dominación colonial portuguesa eran harto conocidas para requerir se tratara de ellas en detalle. La tiranía portuguesa y la crueldad con que estaba siendo reprimida la mayoría africana en los territorios portugueses constituía una tragedia bien conocida que había escandalizado a la conciencia de la

humanidad. En una sesión anterior se había puesto en conocimiento del Comité el relato de un testigo presencial acerca de los métodos de represión usados por los fascistas portugueses contra el pueblo inocente que luchaba por la libertad. Su delegación deseaba expresar de nuevo su reconocimiento al Sr. Ervedosa, quien, impulsado por elevados motivos humanitarios y una alta conciencia moral, se había separado de las filas del ejército portugués en protesta contra los actos de barbarie perpetrados por Portugal. El representante expresó la esperanza de que surgieran más portugueses que, con igual dignidad y abnegación que el Sr. Ervedosa, se pusieran del lado de la justicia.

537. El citado representante no tenía intención de repetir las atrocidades del crimen que Portugal estaba cometiendo contra la humanidad. Tampoco le sería necesario recapitular las diversas recomendaciones concretas formuladas al respecto por el Comité y por otros órganos de las Naciones Unidas. Sin embargo, siendo deber del Comité el hacer uso constante de esa tribuna para tener al corriente a la opinión mundial interesada de la evolución de esos territorios, se sentía obligado a recordar algunos rasgos destacados de las medidas adoptadas hasta entonces.

538. Reconociendo la gran tragedia humana que entrañaba el problema de la administración colonial portuguesa, la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus diversos órganos en varias ocasiones habían estudiado y formulado claras propuestas y recomendaciones acerca de esos territorios, que estaban siendo explotados sin piedad por Portugal. No existía duda en el ánimo de nadie de que esos territorios eran territorios no autónomos según la acepción que daba el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la pretensión de las autoridades portuguesas de que Portugal y sus así llamados territorios de ultramar constituían una "nación pluricontinental y multirracial" carecía de todo fundamento y había sido rechazada sin duda ninguna. La situación originada por la posición sumamente irreal sostenida por Portugal, en lo relativo a la población africana de sus territorios y a los Estados vecinos, perturbaba seriamente la paz y la seguridad internacionales.

539. El Primer Ministro Salazar, explicando la política de su Gobierno acerca de sus territorios, había dicho que, en el caso de Portugal, lo único que importaba era determinar si las leyes conferían a los ciudadanos de los territorios los mismos derechos políticos, o sea, aquellos derechos mediante los cuales el individuo influía en el carácter del Estado.

540. Si se preguntaba si tal cosa se había conseguido en los territorios portugueses, la respuesta era un rotundo no. Si se le juzgaba con cualquier criterio moral, Portugal no podía escapar a la reprobación que merecía la anticuada política que aplicaba a sus territorios.

541. Una y otra vez, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Comité Especial habían pedido entre otras cosas al Gobierno de Portugal que reconociera los derechos inalienables de los pueblos de los territorios bajo su administración a la libre determinación y a la independencia de conformidad con lo dispuesto en la Carta y en la resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, la cual proclamaba solemnemente la necesidad de poner fin de manera rápida e incondicional al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.

542. Por lo que el Comité había escuchado de los peticionarios y de los varios informes de los territorios, era evidente que la situación en los territorios portugueses había tomado un giro desfavorable. Cada día que pasaba señalaba crímenes atroces cometidos contra la humanidad. Más y más africanos cada día eran exiliados de sus hogares, puestos en prisión y torturados. Millares de ellos eran ejecutados por una de las fuerzas militares más brutales que el mundo hubiera conocido jamás.

543. Para esa operación cruel e inhumana, Portugal desembolsaba millones de dólares con que sostener su ejército de ultramar. Sus gastos durante el período 1961-65 se habían elevado a unos 600 millones de dólares de los Estados Unidos. Para un país tan pobre y atrasado como Portugal, la suma no era pequeña. Bien claro estaba cómo y de dónde obtenía Portugal sus fondos para su ignominiosa guerra contra el pueblo africano de sus territorios. El Comité había aprobado varias resoluciones en las que se pedía a todos los Estados Miembros se abstuvieran de ofrecer a Portugal cualquier asistencia que le permitiera continuar su represión contra los pueblos de sus territorios, y que adoptaran medidas para impedir no solamente la venta y abastecimiento de armas y equipo militar al Gobierno portugués para ese objeto, sino también la venta y envío del equipo y materiales necesarios para la fabricación y conservación de armas y municiones que habían de usarse en los territorios. Su delegación abrigaba la ferviente esperanza de que todos los Miembros cumplirían tal petición e informarían al Secretario General de las Naciones Unidas, tal como se recomendaba, acerca de las medidas que hubieran tomado para la aplicación de todas las recomendaciones.

544. Ya habían transcurrido varios años desde que los portugueses habían comenzado su guerra colonial descarada en Angola, Mozambique y la llamada Guinea Portuguesa. Con esa conducta habían demostrado la despiadada crueldad con que suprimían brutalmente toda manifestación de sentimiento nacional entre las poblaciones.

545. Sin embargo, el clamor de los millones de africanos no permanecería ignorado mucho más tiempo. Cuanto antes se diera cuenta Portugal de que no podía invertir la marcha de la historia, mejor le iría. Por mucho que se intensificara la barbarie del instrumento portugués de opresión, por generosos que fueran sus aliados, por bien calculada que estuviera su guerra psicológica, económica y social contra el pueblo africano, Portugal no podría resistir el embate de las olas de la historia y del despertar del espíritu africano. Además, los sistemas de opresión humana semejantes al establecido por Portugal estaban condenados al desplome en virtud de su propia maldad.

546. El representante del Afganistán recordó que, aunque ya habían transcurrido más de cinco años desde que la Asamblea General había aprobado su resolución 1514 (XV), los territorios portugueses seguían sometidos a la más despiadada forma de explotación colonial. La acción de Portugal al aferrarse a esos territorios por la fuerza de las armas había despertado indignación mundial. Le había demostrado así que Portugal con la excusa de que esos territorios formaban parte de la menoría portuguesa, no pensaba aplicarles las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General ni siquiera prepararlos para la libre determinación. Sin embargo, las políticas semejantes seguidas en el pa-

sado por otras Potencias coloniales habían fracasado siempre.

547. Portugal propiamente dicho era un país pobre y estaba esforzándose por alcanzar un nivel más alto de desarrollo. No obstante, llevaba cinco años de costosa guerra colonial. Era evidente que Portugal no podía sostener esa guerra por sí solo y que recibía asistencia de sus aliados, especialmente de Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

548. La Asamblea General, en el párrafo 8 de su resolución 2107 (XX), de 21 de diciembre de 1965, había pedido a todos los Estados, y en particular a los aliados de Portugal en la OTAN, que desistieran de facilitarle armas; si se llevara a la práctica, esa resolución contribuiría a paralizar a Portugal. No obstante, la confabulación entre Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur venía asegurando la impunidad a Portugal.

549. Los peticionarios a quienes el Comité había concedido audiencia en Dar es Salaam había dado testimonio de que Sudáfrica había asentado a millares de blancos en Mozambique, y de que Portugal obligaba a miles de naturales de Mozambique a buscar trabajo en Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Las consecuencias económicas de tal acción causaban repugnancia: esos tres países estaban formando una especie de mercado común de mano de obra ambulante barata.

550. En esa situación desesperada había un rayo de esperanza: los defensores de la libertad no sólo habían liberado grandes extensiones de los territorios dominados por los portugueses, sino que estaban incluso administrándolos. Ello era cosa significativa en vista de que Portugal sostenía que el movimiento de liberación no era una fuerza organizada sino una banda de agentes del extranjero. Otro hecho importante era la agrupación en la Conferencia das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) de todos los movimientos nacionalistas.

551. El Comité tenía que decidir la línea de conducta que debía adoptar. Su delegación creía que, en vista de la peligrosísima situación de los territorios portugueses y del incumplimiento por parte de Portugal de las resoluciones de las Naciones Unidas, el Comité debiera recomendar que el Consejo de Seguridad hiciera obligatoria la aplicación de la resolución 2107 (XX) y debiera también instar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a los organismos especializados a que hicieran todo lo posible por prestar asistencia a los refugiados y a otras personas de los territorios portugueses. Eso era lo menos que el Comité podría hacer para ayudar al valiente pueblo de esos territorios.

552. El representante de Malí dijo que los peticionarios habían informado objetivamente al Comité Especial acerca de la conducta inhumana de las tropas de reconquista que el Gobierno de Portugal había enviado contra Angola, Mozambique y la denominada Guinea Portuguesa, y habían aportado asimismo pruebas convincentes de la conspiración urdida contra las poblaciones africanas por los grandes monopolios financieros internacionales que apoyaban al retrógrado Gobierno de Lisboa. La delegación de Malí denunciaba y condenaba con energía ese apoyo, que violaba la Carta de las Naciones Unidas e infringía resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y del Comité Especial en las que se pedía a todos los Estados que rompieran sus relaciones económicas con Portugal y se

abstuvieran de concederle ayuda financiera en tanto no respetase las resoluciones de las Naciones Unidas.

553. En el documento de trabajo preparado por la Secretaría (párrs. 1 a 244 *supra*) se mencionaba una declaración de Salazar en la que subrayaba que los Territorios de Angola, Mozambique y Guinea formaban parte integral de Portugal, por cuyo motivo no cabía admitir la libre determinación para sus poblaciones. El representante de Malí rechazaba tales aseveraciones. Desde el punto de vista geográfico, esos territorios no podían ser parte integral de Portugal, que se encontraba situado en Europa. Así, pues, era necesario buscar el vínculo jurídico que unía a esos países con Portugal. Para hacerlo, el representante de Malí citaba la declaración formulada por el Embajador Ramani, de Malasia, el 9 de noviembre de 1965, ante el Consejo de Seguridad:

“... Por tanto, si podemos establecer y definir la índole de esos vínculos entre Portugal y sus territorios de África y Asia, poco importa que se los designe con el nombre de colonias o de territorios de Ultramar, o de provincias de Ultramar. Todo aquel que se tome el trabajo de examinar los documentos constitucionales de Portugal — de los que acabo de hablar — llegará indudablemente a la conclusión de que los territorios de que nos ocupamos en estos momentos son, en el sentido que generalmente se da a esas palabras, territorios coloniales no autónomos de Portugal.

“Y voy a explicarme: el capítulo VI de la segunda parte de la Constitución portuguesa, incluye en su título la expresión “Portugal metropolitano”; el capítulo VII se titula “Portugal de Ultramar”. El artículo 133 es extremadamente significativo; si se me permite, procederé a citarlo:

“Es intrínseco en la nación portuguesa cumplir su misión histórica de colonizar los territorios de Ultramar colocados bajo su soberanía, y difundir entre sus poblaciones los beneficios de su civilización, así como ejercer la influencia espiritual que le corresponde en la tutela del Oriente.”

“Encontramos, por consiguiente, que se utiliza sin vergüenza la temible palabra “colonizar”.

“El artículo 134 indica:

“La Ley definirá el régimen general de gobierno de los territorios a los que debe darse el nombre genérico de “provincias”, los cuales tendrán una organización político-administrativa adecuada a su situación geográfica y a las condiciones del ambiente social.”

“Por sí sola, esta denominación de “provincias” no basta para hacer de los territorios de Ultramar provincias del Portugal metropolitano, aunque tales territorios sean partes integrales del Estado portugués, de conformidad con el artículo 135 de la constitución.”²⁸

554. En consecuencia, los territorios de Angola, Mozambique y Guinea (Bissau), si de ellos se decía que eran colonias, quedaban comprendidos dentro de las disposiciones del Capítulo XI de la Carta y debían ser exa-

minados a la luz del Artículo 73 de ésta, que obligaba a la Potencia administradora a conducir a las poblaciones administradas hacia el gobierno propio. Correspondía entonces que las Naciones Unidas adoptasen medidas contra el Gobierno portugués y lo obligaran a respetar la Carta. Se debería fijar una fecha para que Portugal liberara a todas sus colonias y retirara sus bases militares. El representante de Malí denunció la conspiración de los Gobiernos de Portugal, Sudáfrica y el Reino Unido, en virtud del régimen inícuo que habían instalado deliberadamente en Salisbury. Esas fuerzas malignas se ayudaban mutuamente, reprimiendo sin piedad el más ligero intento de independencia de la población africana. En Portugal, por ejemplo, en el caso de las elecciones que acababan de celebrarse, la ley preveía un diputado por cada 80.000 habitantes en el territorio nacional portugués, uno por cada 650.000 en Angola y uno por cada 900.000 en Mozambique. Pero no bastaba esa repartición arbitraria; la ley estipulaba, además, que para ser electores los habitantes autóctonos debían reunir las condiciones pertinentes. Ahora bien, según la legislación en vigencia, poseían derecho de sufragio los ciudadanos portugueses varones y mayores de edad: a) que estuvieran emancipados y supieran leer y escribir el portugués; b) que, aunque no supieran leer ni escribir, tuvieran capacidad cívica y política y pagaran al Estado o a las autoridades administrativas una suma igual por lo menos a 100 escudos por concepto de uno o varios de estos impuestos: inmobiliario, industrial, profesional o por colocación de capitales. Así pues, aunque el Gobierno portugués sostenía que el derecho de sufragio se concedía a todos en condiciones de igualdad, existían como mínimo dos barreras — una de capacitación y otra de índole impositiva — que seguían privando de ese derecho a la mayoría de los autóctonos. La misma ley, con todo lo que implicaba de arbitrariedad y desigualdad, existía, con diversas denominaciones, en Rhodesia y en Sudáfrica. En tales circunstancias, los autóctonos no tenían otro recurso que la lucha armada para recuperar su legítimo derecho a la condición de hombres.

555. Acorralado en sus reductos, el imperialismo sostenía con todas sus fuerzas el régimen fascista de Salazar a fin de perpetuar una dominación execrada por la historia y destinada al fracaso. El Sr. Salazar había excluido la posibilidad de una “solución política” para poner fin a los combates en los territorios africanos que administraba Portugal. Además, había afirmado que la continuación del esfuerzo militar era el único medio de asegurar el orden en dichos territorios, así como el progreso pacífico de sus habitantes.

556. El informe de la Secretaría ponía de relieve una progresión en los créditos militares del presupuesto portugués. Se habían aumentado algunos impuestos. De todas maneras, resultaba claro que tales recursos no eran suficientes, pues casi todas las Potencias imperialistas otorgaban apoyo financiero al Gobierno portugués. Pero la ayuda no se concedía únicamente en el terreno financiero, sino también en el de los armamentos, dentro del marco de la OTAN. Poco importaba que los países de la OTAN proporcionaran armas al Gobierno de Portugal sobre una base multilateral o bilateral; lo que había que denunciar era el uso que de ellas hacía en África el Gobierno de Salazar. Miles de africanos caían ante los disparos mortíferos de estas armas. Era preciso condenar a Portugal y a sus aliados, pues la guerra librada contra la población de los territorios bajo

²⁸ Traducción provisional; para el texto definitivo, véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Año, 1254a. sesión, párrs. 34 a 36.*

administración portuguesa era injusta y contraria a los derechos humanos. ¿Cuál era el motivo de esos crímenes abominables? La respuesta la daban las conclusiones del Subcomité I, que había estudiado el aspecto económico de la colonización portuguesa en los territorios africanos. El Subcomité I había llegado a la conclusión de que las actividades económicas y los intereses financieros extranjeros en los territorios bajo dominio portugués impedían que tales territorios conquistaran la independencia, porque otorgaban apoyo material y financiero al Gobierno de Portugal. Así, con la protección de las leyes promulgadas en Lisboa, y con el único propósito de hacer fructificar la economía portuguesa, se había establecido que los recursos minerales y las riquezas naturales no formaban parte del patrimonio de los territorios de Ultramar. Estas riquezas se explotaban cínicamente y se enviaban a Portugal o a otros países de Europa, que, por intermedio del Gobierno de Portugal, habían adquirido concesiones mineras con derecho de vida y muerte sobre las pacíficas poblaciones africanas. De este modo, los autóctonos, privados de sus tierras, se veían reducidos a la esclavitud por los colonos trasladados de Portugal a África. Diversas sociedades europeas se habían agrupado para saquear las riquezas del subsuelo de Angola. Resultaba evidente el aspecto político de dicha explotación, que permitía al Gobierno portugués obtener beneficios considerables, al tiempo que le evitaba conmociones sociales y le abría mercados en Europa y en los Estados Unidos. La extracción de petróleo no había sido olvidada; en esa esfera, no sólo se encontraban capitales portugueses, sino también todo un conjunto de trusts. Era curioso que las empresas petroleras no se hubieran interesado por la extracción del petróleo sino en el instante en que los movimientos de liberación habían iniciado su lucha.

557. Había razones para creer que Portugal, por sí solo, no poseía los recursos ni la potencia económica que se requerían para resistir mucho tiempo al movimiento de insurrección que desbordaba en los países que todavía sufrían su dominación. Estos ejemplos ilustraban los perniciosos efectos de las inversiones efectuadas por los monopolios en beneficio del Gobierno portugués.

558. Sería conveniente explicarles a los capitalistas que debían volver a estudiar la forma en que realizaban inversiones en los territorios bajo dominio portugués, en tanto los pueblos de Angola, Mozambique y Guinea se desembarazaban del yugo colonial portugués. Era menester que respetaran las diferentes resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y que le dijeran a su aliado, Portugal, que retirase sus efectivos militares y concediese la libertad a sus colonias, poniendo en práctica la Declaración que figuraba en la resolución 1514 (XV).

559. Por desgracia, no era posible creer en las declaraciones de las Potencias imperialistas cuando se sabía que, cada día, ofrecían 10 millones de escudos a Portugal, con lo cual le permitían financiar su guerra genocida contra poblaciones africanas. No era posible creer en las declaraciones del Reino Unido, según las cuales, a juzgar por *The Star*, de Johannesburgo, la brigada especial de la policía secreta de Rhodesia del Sur cooperaba con la policía secreta portuguesa para descubrir, y repatriar a Mozambique, a los rebeldes que atravesaban el país con el propósito de llegar a Tanzania. Respecto de esta afirmación, el Sr. Mondlane y el periódico estaban de acuerdo. En su declaración, el Sr. Mondlane había señalado que un camión con 75 personas había

desaparecido en la frontera de Swazilandia. Resultaba claro que allí había intervenido la policía secreta, y nada tendría de extraño que esas 75 personas apareciesen en alguna reserva de Sudáfrica, o incluso que hubiesen sido vendidas en las minas de carbón, permitiendo así que Portugal recibiese el 50% de los beneficios sobre las transacciones relativas a los trabajadores de Mozambique que los administradores portugueses entregaban a los racistas sudafricanos.

560. Era una vergüenza que, en plena mitad del siglo XX, un Estado económicamente pobre, el último de Europa, se aferrara desesperadamente al África, despojando a sus habitantes, saqueando las riquezas del subsuelo, y dejando que sus propietarios naturales se hundieran en la miseria y la ignorancia. Los derechos humanos eran escarnecidos, la Carta de las Naciones Unidas era pisoteada por los mismos que la habían redactado para evitar todo nuevo crimen contra la humanidad.

561. El Comité Especial debía formular recomendaciones precisas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad; este último debía hacer obligatorias las sanciones ya adoptadas contra Portugal. Malí, por su parte, aplicaba ya todas las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas.

562. Era menester recomendar al Secretario General que brindara e intensificara la asistencia a los nacionalistas, que habían liberado buena parte de su país y se consagraban a una tarea de reconstrucción nacional. El representante de Malí aseguró a los nacionalistas que contaban con el apoyo incondicional del pueblo y del Gobierno de la República de Malí. La lucha por la liberación era justa y marchaba en armonía con la historia. La delegación de Malí daría su apoyo a toda resolución que contuviera las medidas citadas, que representaban lo menos que se podía hacer en tanto se aguardara la liberación completa de los territorios bajo dominio portugués, liberación que, por otra parte, no podía tardar en llegar.

563. El representante de la Costa de Marfil destacó que, de las informaciones aportadas por los peticionarios, se desprendía que la situación en los territorios bajo dominio portugués no había mejorado y seguía siendo extremadamente grave. Esos territorios eran el escenario de una lucha armada impuesta a poblaciones pacíficas por el régimen fascista de Salazar. El pueblo de dichos territorios sufría, desde hacía siglos, la pobreza, la miseria y la ignorancia.

564. Hacía años que mediante las resoluciones pertinentes, las Naciones Unidas trataban de convencer a las autoridades portuguesas de que abandonaran su anacrónico concepto de la libre determinación y reconocieran a los pueblos de los territorios que se encontraban bajo su dominación el derecho a la libertad, a la libre determinación — tal cual se la definía universalmente, y en especial en la resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas — y a la independencia. A esos esfuerzos, era conveniente que se agregaran las gestiones colectivas o individuales de Estados amigos de Portugal. Desgraciadamente, las autoridades portuguesas sólo respondían con negativas de desprecio; peor aún, proseguían e intensificaban la lucha armada, gracias al armamento que recibían dentro del marco de la OTAN. Sería aconsejable, pues, que los miembros de la OTAN adoptasen medidas concretas para impedir que Salazar utilizara así las armas puestas a su disposición y almacenadas en Portugal.

565. El testimonio de periodistas y técnicos cinematográficos confirmaba una vez más las atrocidades de que Portugal hacía objeto a las poblaciones sometidas a su dominación. A juicio de la delegación de la Costa de Marfil, esos crímenes eran más horribles que los de los nazis, que, en su momento, habían provocado la indignación del mundo entero.

566. El representante de la Costa de Marfil estimó que era menester denunciar a los Estados y a los monopolios financieros que permitían que Salazar llevara adelante su guerra de exterminio.

567. El Comité, tras haber sido informado del éxodo en masa de las poblaciones de Mozambique, Angola y la denominada Guinea Portuguesa, debería insistir en que se ayudase más a los refugiados.

568. Portugal, que deseaba identificarse con cierto tipo de civilización, debía comprender que el curso de la historia era irreversible y que, pese a la perfección de las armas que poseía, su imperio colonial correría la misma suerte que los demás imperios coloniales.

569. La delegación de la Costa de Marfil estaba dispuesta a brindar su apoyo a toda resolución que reafirmara el derecho inalienable de los pueblos de los territorios bajo dominio portugués, condenara los actos de barbarie del régimen de Salazar e invitara a todos los Estados, especialmente a los aliados de Portugal, a que se abstuvieran de proporcionarle ayuda militar y financiera. Convendría que el Consejo de Seguridad diese carácter obligatorio a las sanciones adoptadas contra el Gobierno de Lisboa. Si se aplicaban esas medidas, el régimen de Salazar no podría sobrevivir.

570. El representante de la Costa de Marfil volvió a pedir a las grandes Potencias, en particular a aquellas que integraban la OTAN, que se abstuvieran de ayudar a Portugal. Al no escuchar los llamamientos de los africanos, esas Potencias se hacían cómplices del genocidio perpetrado en los territorios bajo dominio portugués. El citado representante expresó la esperanza de que, luego de los testimonios directos y precisos escuchados, ya no habría abstencionistas entre los miembros del Comité y de que, por fin, se aislaría a Portugal.

571. La Costa de Marfil, al igual que todos los demás Estados amantes de la paz y de la libertad, haría cuanto se encontrara a su alcance por liberar a Angola, Mozambique y la denominada Guinea Portuguesa del vergonzoso régimen de Salazar.

572. El representante del Irak dijo que, de los diversos problemas coloniales con que se enfrentaban el Comité Especial y las Naciones Unidas, el de los territorios africanos bajo administración portuguesa presentaba aspectos especiales de trascendentes consecuencias. Portugal seguía negando al pueblo africano el derecho a la libre determinación y la independencia, negándose al mismo tiempo a reconocer que dichos territorios eran en realidad colonias de las que debía dar cuenta ante las Naciones Unidas y ante el mundo. A diferencia del régimen de Verwoerd en Sudáfrica que propiciaba abiertamente la perversa política del apartheid, Portugal alegaba seguir una política de no discriminación contra la población indígena y procuraba eludir toda la cuestión con el pretexto de la asimilación. La afirmación de Portugal de que la lucha nacionalista en los territorios bajo su dominio estaba instigada desde el exterior estaba en total contradicción con el hecho de que, en Angola, el pueblo africano venía luchando

heroicamente por su independencia desde hacía más de cinco años, lucha para la cual Portugal había tenido que obtener ayuda de sus amigos, entre ellos Israel. Como habían informado los peticionarios en Dar es Salaam al Comité, la lucha armada se extendía a los restantes territorios portugueses, entre ellos Guinea y Cabo Verde. Pero los esfuerzos desesperados de Portugal por mantener una cabeza de puente en Africa habían de fracasar a la larga frente a la marea creciente del nacionalismo africano. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y en particular aquellos que mantenían relaciones especiales con Portugal, debían asumir sus responsabilidades, contribuyendo a lograr la rápida liquidación del imperio colonial portugués en Africa.

573. El representante de Polonia dijo que las Naciones Unidas llevaban más de un decenio estudiando la cuestión de los territorios africanos bajo administración portuguesa, y que se habían hecho muchas recomendaciones al respecto. No obstante, Portugal, al igual que los regímenes racistas de Sudáfrica y Rhodesia del Sur, seguía negándose a aplicar las disposiciones de las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas y a cumplir las disposiciones de la Carta y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

574. Esa actitud de Portugal era singular, por cuanto se trataba de la única Potencia administradora que seguía sosteniendo que sus territorios eran provincias de ultramar que formaban parte integrante del territorio metropolitano. Esa actitud estaba dictada, sin embargo, por intereses económicos, dado que los territorios producían divisas, y en particular divisas fuertes, que utilizaba Portugal para compensar el déficit en su balanza de pagos. La exportación de café y de diamantes era la fuente principal de esos ingresos, a los que se sumaban además los de los ferrocarriles en Angola y Mozambique, y los correspondientes a los servicios prestados por los puertos de Africa oriental, Beira y Lourenço Marques. En el caso del café de Angola lo importante no era que se tratase del producto que más se exportaba sino que, como el principal comprador son los Estados Unidos, ese producto producía dólares y otras divisas. En cuanto al segundo producto de Angola por la importancia de las exportaciones — los diamantes — en 1962 la producción total había ascendido a unos 986.000 quilates, que se habían vendido al Reino Unido a un precio medio de menos de 22 dólares por quilate. Incluso en la prensa portuguesa había habido comentarios que mostraban indignación por el hecho de que dicho precio era muy inferior al del mercado mundial al que se vendían los diamantes del Africa Sudoccidental. Además, Angola y Mozambique producían materias primas como petróleo, mineral de hierro, oro y uranio, y las empresas portuguesas obtenían enormes beneficios de la venta de los mismos así como de la venta de cobre, cacao, azúcar, algodón, carne, productos textiles y vidrio. El Gobierno de Portugal obtenía incluso grandes ingresos de la venta de mano de obra africana en Sudáfrica, a donde se veían obligados a emigrar los trabajadores para emplearse en las minas. La mayor parte de las industrias de Angola y Mozambique eran empresas subsidiarias de las casas centrales en Rhodesia del Sur y Sudáfrica. Del estudio del Comité Especial a ese respecto se desprendía que los monopolios a los que Salazar había dado concesiones para explotar la riqueza de Angola y Mozambique, estaban obteniendo enormes beneficios a expensas de la población local.

Entre esas empresas figuraban la Angola Diamond Company, el trust Petrofina de Bélgica, la Gulf Oil Corporation of America, la Mozambique Gulf Oil Company, el trust Rockefeller, la Standard Oil of New Jersey y el trust Krupp de Alemania occidental. El colonialismo portugués contaba con poderosos aliados en esos monopolios que controlaban la economía del África meridional desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Kátanga. Con el objeto de proteger los intereses de los monopolios y mantener la supremacía blanca y el colonialismo en África, ciertas Potencias occidentales estaban proporcionando ayuda financiera, política y militar a Portugal a fin de que ese país pudiera desafiar las resoluciones de las Naciones Unidas. El Sr. Luis Almeida, representante en Argelia del Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), había revelado recientemente que las principales empresas de los Estados Unidos, Alemania occidental, Bélgica y el Reino Unido habían creado incluso ejércitos privados de mercenarios para proteger sus intereses.

575. El hecho de que Portugal siguiera recibiendo ayuda de sus aliados, lo que le permitía soportar una guerra en tres frentes, había sido confirmado unánimemente por los peticionarios que habían comparecido ante el Comité. Esos peticionarios consideraban que la mejor contribución que podrían aportar las Naciones Unidas en pro de la liberación de los pueblos africanos oprimidos bajo la dominación portuguesa consistía en pedir a los Estados Unidos, a la República Federal de Alemania y al Reino Unido que retiraran todo apoyo militar y económico a Portugal. El Comité había tenido una y otra vez la oportunidad de escuchar las pruebas de que Portugal había utilizado armas fabricadas en esos países en Angola, la Guinea Portuguesa y Mozambique, lo que mostraba además que ese país estaba intensificando la guerra de exterminio contra el pueblo africano. En los territorios portugueses prevalecían las condiciones más inhumanas: decenas de miles de africanos habían muerto por malos tratos o por bombardeos y otros ataques con armas modernas. El Comité había escuchado al Sr. Cabral, dirigente del Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que se había referido a un ataque aéreo realizado por bombarderos y aviones a reacción de fabricación norteamericana y alemana contra los habitantes inocentes y pacíficos de una aldea. El Dr. Mondlane, dirigente de FRELIMO, había informado además al Comité que Alemania occidental no sólo proporcionaba armas a Portugal sino que había establecido asimismo una base militar en Portugal donde se adiestraba en guerra de guerrillas a fuerzas militares de las Potencias de la OTAN. Alemania occidental y los demás miembros de la alianza de la OTAN habían hecho caso omiso de todos los llamamientos de los diversos órganos de las Naciones Unidas, por los que se pedía a los Estados que se abstuvieran de proporcionar al Gobierno de Portugal toda asistencia que permitiera a ese país continuar su represión contra la población africana de los territorios bajo su dominio.

576. El 23 de marzo de 1966 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Alemana había dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas una carta en la que se refería a la resolución 218 (1965) aprobada por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la cual se pedía a todos los Estados que informaran acerca de las medidas adoptadas para aplicar el párrafo 7 de la parte dispositiva de dicha reso-

lución. El representante de Polonia citó los párrafos siguientes de dicha carta:

“De conformidad con los principios que sostiene, el Gobierno de la República Democrática Alemana se ha adherido siempre estrictamente a todas las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas con relación a la política colonial de Portugal. Sobre este punto la República Democrática Alemana difiere fundamentalmente de la República Federal de Alemania occidental, cuyo apoyo moral y material al colonialismo portugués fue condenado firmemente durante los debates de la Cuarta Comisión en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La República Democrática Alemana no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con el régimen colonial de Portugal.

“No presta ninguna asistencia que pueda ser utilizada por Portugal para reprimir a la población de los territorios que administra.

“Tampoco ha vendido ni suministrado a Portugal armas, municiones, equipo militar ni ningún material para la fabricación o mantenimiento de armas y municiones, ni suministrará en el futuro ninguno de dichos elementos al régimen colonial de Portugal.

“Además, según instrucciones cursadas el 5 de abril de 1965 por el Ministro de Comercio Exterior e Interior, se comunicó a todas las empresas de comercio exterior de la República Democrática Alemana que no debía hacerse ningún envío, directo ni indirecto, de la República Democrática Alemana a las empresas portuguesas en los territorios que están todavía bajo la dominación colonial de Portugal.”

577. Portugal no sólo se negaba obstinadamente a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas sino que estaba intensificando de hecho su política de opresión y utilizando la fuerza militar para impedir que el pueblo gozara de su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. El Gobierno de Polonia había condenado siempre la política colonial de Portugal y había denunciado en muchas oportunidades a aquellas Potencias occidentales de la alianza de la OTAN que seguían proporcionando a Portugal un apoyo activo de carácter político, moral y militar. El Gobierno polaco opinaba que los aliados de Portugal en la OTAN eran responsables de que ese país siguiera ejerciendo su dominio sobre vastas extensiones del continente africano. La situación explosiva existente en los territorios portugueses, que constituía una amenaza a la paz, tenía su origen en la comunidad de intereses entre un grupo de países neonazis que se oponían a la independencia y al desarrollo del África. Las cuestiones de los territorios africanos dominados por Portugal, de Rhodesia del Sur y de Sudáfrica no podían desvincularse una de otra; y la situación en cada uno de ellos sería muy diferente si los Estados Unidos, Alemania occidental y el Reino Unido dieran cumplimiento a las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas.

578. Se necesitaba una acción a largo plazo: las Naciones Unidas, de conformidad con los principios de libertad y de justicia consagrados en la Carta y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, debían adoptar medidas eficaces. Había llegado la hora de aislar a Portugal, en lo económico, lo político y lo militar, a fin de que

se viera obligado a abandonar su política de intransigencia y desafío. El Comité Especial tenía el deber de asegurar que se adoptaran medidas positivas para poner término al sufrimiento inhumano de la desdichada población de los territorios africanos dominados por Portugal, población que durante casi 500 años había vivido prácticamente en la esclavitud, presa de la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. El pueblo de Polonia consideraba que la lucha de los pueblos de Angola, la Guinea Portuguesa y Mozambique era una lucha justa y legítima, y que cabía felicitar a esos pueblos y a sus dirigentes por haber liberado ya a parte de su patria. Era de esperar que los distintos movimientos de liberación nacional unieran sus esfuerzos en la heroica lucha contra Portugal y sus aliados.

579. El representante de Polonia estaba de acuerdo con la sugerencia hecha por los peticionarios de que el Comité pidiera al Consejo de Seguridad que examinara la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General y la resolución 218 (1965) del propio Consejo a fin de hacer obligatorias las medidas previstas en las mismas, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta. Deseaba asimismo reiterar su solicitud de que se pidiera a los organismos especializados que aumentaran su ayuda a los movimientos de liberación nacional en los territorios bajo dominación portuguesa y a la población que había sufrido y seguía sufriendo la guerra desencadenada por las fuerzas coloniales portuguesas.

580. El representante de la República Unida de Tanzania dio las gracias, en nombre de su delegación, a los peticionarios por la información que habían proporcionado al Comité Especial tanto en Argel como en Dar es Salaam pues había arrojado nueva luz sobre las atrocidades perpetradas contra el pueblo africano en los territorios dominados por Portugal. El Comité siempre había considerado, con razón, estos territorios en conjunto puesto que el colonialismo, dondequiera que existiera, significaba inevitablemente subyugación y opresión. Los pueblos africanos que resistían a los agresores portugueses, devolviendo golpe por golpe, estaban empeñados en una lucha que no sólo liberaría sus territorios patrios sino que también, en opinión de su delegación, serviría para apoyar y reforzar la Carta de las Naciones Unidas y los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

581. Analizando la situación general, dijo que el hecho de que Portugal fuera una nación pobre y atrasada contribuía a explicar el origen de su agresión colonial. Con apoyo de aliados poderosos, había podido mantener su política de subyugación de los pueblos africanos. Pese a lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, los imperialistas portugueses persistían en negar la independencia a los territorios que dominaban y de hecho habían intensificado sus actividades agresivas y criminales contra el pueblo que, como resultado de esto, se había visto obligado a levantarse en armas para defenderse y liberar a su país.

582. Refiriéndose a un pasaje del prólogo escrito por el Sr. Ronald Segal al libro del Profesor James Duffy *Portugal in Africa*, dijo que ilustraba la inutilidad y la crueldad del colonialismo portugués en Africa y servía de advertencia a los aliados de Portugal.

583. Al examinar la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa, había que tener en cuenta

tres factores fundamentales: primero, las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas portuguesas; segundo, el apoyo que Portugal recibía de agrupaciones regionales en el extranjero y que utilizaba, con conocimiento de los que habían proporcionado este apoyo, contra los pueblos africanos; y tercero, el papel desempeñado por los elementos extranjeros y los monopolios financieros en los territorios de que se trataba.

584. Con relación al primer factor, aunque la opresión colonial debía condenarse siempre, la que se perpetraba en contra de los pueblos de Angola, Guinea Portuguesa y Mozambique constituía una clase aparte. Los peticionarios que habían comparecido ante el Comité habían revelado que pueblos enteros habían sido arrasados por bombarderos portugueses, y habían aportado pruebas documentales de casos de niños descuartizados. Además, el Sr. Ervedosa había informado al Comité de que las fuerzas aéreas portuguesas en Angola tenían órdenes de bombardear los pueblos africanos sin discriminación alguna. Era evidente que el objetivo que se perseguía era aniquilar al heroico pueblo africano que resistía la opresión colonial. Holgaba decir que, como resultado de crímenes tan brutales, el Sr. Ervedosa se había rebelado contra el régimen portugués. Este peticionario, que solamente había proporcionado información sobre acontecimientos de los que él mismo había sido testigo presencial, había dicho también que entre marzo y junio de 1961 habían sido asesinados miles de africanos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Era de esperar que estos hechos escandalosos despertaran las conciencias de las naciones que todavía se negaban a reconocer los crímenes perpetrados por Portugal.

585. El hecho de que Portugal, pobre y atrasado, estuviera en condiciones de continuar una guerra de agresión contra el pueblo africano llevaba al representante de Tanzania al segundo factor básico que había que tener en cuenta. Según habían informado al Comité los peticionarios tanto en Dar es Salaam como en Argel, Portugal recibía armas de los miembros de la OTAN. Los peticionarios incluso habían podido indicar las marcas de esas armas. Aunque no cabía la menor duda de que, según había dicho el representante de los Estados Unidos en aquella ocasión, eran armas antiguas, procedentes de la segunda guerra mundial, no por ello dejaban de ser instrumentos de destrucción, capaces de quitar gran número de vidas. Además, en un artículo de *The New York Times* del 25 de octubre de 1964 se hacía referencia al hecho de que Alemania occidental vendía armas y equipo a Portugal, y el Sr. Cabral, uno de los peticionarios, había informado al Comité el día anterior de que la República Federal de Alemania también estaba montando, mediante licencia, aviones FIAT 91 de diseño italiano para que Portugal los utilizara en su guerra contra los pueblos africanos. En otro artículo de *The New York Times* del 16 de marzo de 1965, se decía que Francia iba a vender 60 aviones de caza a reacción a Portugal y estaba negociando la construcción de buques de guerra para dicho país. Todos los peticionarios de los territorios de Africa oprimidos por Portugal habían dado testimonio de la presencia de muchos tipos de armas, entre ellas tanques, aviones, cohetes y bombas.

586. Pese a las afirmaciones en contra que sin duda se oirían, todas las pruebas señalaban el hecho de que algunos miembros de la OTAN, por ejemplo los Estados Unidos, Francia y la República Federal de Alemania, prestaban ayuda material a las fuerzas agresoras de

los colonialistas portugueses. Sin embargo, esos países afirmaban repetidamente que, en virtud del Pacto de la OTAN, tales armas estaban destinadas solamente para que Portugal las empleara en Europa. No debían engañarse sin embargo; el régimen portugués no respetaría compromiso alguno de no utilizar dichas armas contra el pueblo africano y, de hecho, estaba desafiando la opinión mundial simplemente porque contaba con el apoyo de los países occidentales. Y lo que era bastante irónico, las armas proporcionadas bajo los auspicios de la OTAN también se utilizaban dentro de Portugal contra los que se oponían no solamente a las guerras colonialistas sino también al régimen fascista de Salazar. Algunos países occidentales proclamaban por una parte en alta voz su apoyo de la democracia pero ayudaban por otra a robustecer el régimen totalitario. La única conclusión que podían sacar los africanos era que tales países estaban dispuestos a apoyar a Portugal siempre que siguiera siendo blanco y anticomunista; un crimen contra los pueblos africanos no era tan serio como un crimen contra los intereses financieros de esos países. Así era evidente, según habían demostrado claramente los representantes de los pueblos de Angola, Guinea Portuguesa y Mozambique que habían comparecido ante el Comité como peticionarios, que Portugal podía seguir su guerra contra los pueblos africanos solamente porque recibía una gran cantidad de apoyo material de sus aliados. Y este apoyo se concedía porque Portugal cooperaba en la explotación de los ricos recursos naturales de África.

587. El tercer factor básico que había mencionado el representante de Tanzania se refería a la explotación económica en los territorios bajo dominación portuguesa. Por supuesto, se hablaría mucho del valor de las inversiones y de la necesidad del libre comercio para el desarrollo de dichos territorios. Sin embargo, fueran cuales fueran las ventajas, no cabía duda de que las inversiones en los territorios colonizados y las actividades de los monopolios financieros que operaban en ellos representarían un impedimento al logro de la libertad y la independencia por parte de los pueblos de dichos territorios. Este hecho había quedado claramente demostrado en el estudio realizado por el Subcomité I, estudio que había sido aprobado por el Comité y apoyado por mayoría en la Asamblea General. El documento preparado por la Secretaría en relación con este asunto demostraba también que las compañías extranjeras que operaban en las colonias portuguesas contribuían con parte de sus beneficios a la "defensa" de dichos territorios: de hecho, este término se refería a la guerra criminal que desarrollaban contra los pueblos africanos los colonialistas portugueses en su inútil intento de aferrarse a las tierras africanas. Pero Portugal sólo necesitaba defenderse contra el régimen de Salazar. En África, ni Portugal ni sus aliados tenían nada que defender, puesto que los recursos de dicho continente pertenecían solamente a los africanos.

588. El representante de Tanzania citó un pasaje del libro *Mission to Portugal* escrito por un antiguo embajador del Brasil en Portugal, y dijo que ilustraba la explotación por parte de un grupo minoritario de las riquezas de Portugal que pertenecían de derecho al pueblo. De modo análogo, la codicia de los ricos recursos de los territorios africanos bajo dominación portuguesa era la que llevaba a algunos monopolios financieros a lograr sus fines a cualquier precio. Según el boletín de información "Free Angola" No. 3 (1965), entre

estos monopolios financieros figuran la Angola Diamond Company, filial de la Anglo-American Diamond Corporation Ltd., la Teresa Berman Company, asociada con la Lay Frères y la Sociedade Comercial João Fernandes, que se ocupaban de la producción de manganeso. Este mineral quedaba enteramente monopolizado por la Companhia Mineira do Lobito, Krupps de Essen (Alemania), Jojgaard and Schultz A. S., de Dinamarca, y Lagos e Irmão, de Portugal. Se decía también en el boletín de información que la complicidad de estos intereses financieros en la guerra colonial portuguesa de Angola estaba fuera de duda, como se podía ver examinando los objetivos y la política tributaria proclamada por el gobierno territorial en 1962, en la que se hacía referencia a un impuesto de defensa pagadero por todas las empresas que se habían establecido hacía más de cinco años y tenían beneficios netos de 1 millón de escudos o más. Estos datos, recogidos por el pueblo de Angola, quedaban confirmados en otros documentos y los corroboraban los combatientes de la libertad de Mozambique y Guinea Portuguesa.

589. En opinión de su delegación solamente había dos modos de encontrar solución al problema. O bien Portugal y todos los países que no lo habían hecho hasta la fecha aceptaban y aplicaban las disposiciones de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y los que decían que se oponían a la política colonial de Portugal pero sin embargo le prestaban asistencia material retiraban dicha asistencia; o como alternativa, habría que emplear la fuerza. Portugal estaba intensificando su política criminal con apoyo de sus aliados y, ante esta situación, la valerosa población había tenido que levantarse en armas para defenderse y liberar su tierra. El pueblo africano no quería la guerra pero se había visto obligado a hacerla, y su lucha justa se vería finalmente coronada por la victoria.

590. Para terminar, su delegación consideraba que el Consejo de Seguridad debía reunirse en África para oír las opiniones de los combatientes de la libertad que habían comparecido ante el Comité durante su actual período de sesiones.

591. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que cada vez que el Comité Especial examinaba las cuestiones de Angola, Mozambique y la Guinea llamada Portuguesa se mencionaban nuevos crímenes perpetrados por los colonizadores contra la población. La cruel opresión a la que estaba sometida la población de los territorios bajo dominación portuguesa no afectaba solamente a África sino que constituía también una amenaza para la paz y la seguridad del mundo. El régimen de policía del colonizador sólo podía compararse con el odioso régimen de Hitler. La responsabilidad de esta política criminal recaía no solamente sobre el régimen de Salazar, sino también sobre sus aliados de la OTAN que proporcionaban a Portugal ayuda importante y diversa. Gracias a esta ayuda, Portugal, que era uno de los países más pobres y atrasados de Europa, podía continuar enviando a sus territorios fuerzas armadas equipadas con armas ultramodernas. Según los datos proporcionados por los peticionarios, Portugal, en un esfuerzo desesperado para evitar la derrota, había aumentado sus contingentes militares en Guinea. El Sr. Mondlane había declarado que en Mozambique los efectivos habían aumentado en 7.500 hombres y que Portugal se proponía alcanzar en total la cifra de 70.000 hombres. Por lo tanto, Portugal contaba, en el conjunto

de sus territorios, con más de 100.000 hombres provistos de material moderno. Además, Portugal había emprendido la construcción de bases militares, de aeródromos y de carreteras estratégicas que amenazaban la independencia de los Estados africanos. Los hechos expuestos ante el Comité por los peticionarios demostraban que los Estados miembros de la OTAN ayudaban al régimen portugués. En el curso de los últimos años, los Estados Unidos habían proporcionado a Portugal ayuda financiera y militar que se elevaba a varios centenares de millones de dólares. Aviones norteamericanos habían servido y servían todavía para bombardear a las poblaciones autóctonas de los territorios portugueses.

592. Había que mencionar además la ayuda del Reino Unido y la de la República Federal de Alemania cada vez de mayor importancia. El Sr. Cabral había mencionado el envío de aviones Fiat al Gobierno portugués y recientemente un periódico había publicado la noticia de que Bonn preveía el envío de 40 cazas a reacción construidos en Italia con licencia norteamericana. Los Estados miembros de la OTAN seguían negando que prestaban ayuda a Portugal, alegando que Portugal prometía no utilizar las armas y el material que se le proporcionaba. Las colonias portuguesas eran fuentes de beneficios no solamente para Portugal sino también para los monopolios financieros internacionales cuyas oficinas centrales se encontraban en Nueva York, Londres o Francfort-del-Meno. A cambio de privilegios que les permitían obtener enormes beneficios, los monopolios financieros apoyaban a Portugal proporcionándole sumas considerables. Así, los monopolios internacionales habían concertado abiertamente una alianza con Portugal para acabar con los movimientos nacionalistas. Representaban el mayor obstáculo en el camino de la liberación y de la independencia de los pueblos que sufrían bajo el yugo colonial. La situación estratégica de las colonias portuguesas era igualmente una de las razones que explicaban el comportamiento de los Estados miembros de la OTAN. A este respecto, el representante de la URSS recordó una declaración del Secretario de Estado norteamericano, según la cual Portugal era el único aliado que continuaba aportando una contribución importante a la seguridad mutua. Esta declaración había sido recogida por un periódico portugués, que escribía que las fronteras de los Estados Unidos y de los países occidentales pasaban por las Azores, Angola, Mozambique y Guinea. No era suficiente, sin embargo, recordar la ayuda de la OTAN. Rhodesia del Sur y Sudáfrica proporcionaban una ayuda cada vez más eficaz a Portugal. Estos hechos demostraban que las fuerzas reaccionarias del colonialismo y del racismo, unidas en una alianza impía, no cesaban de crecer, apoyándose en sus aliados occidentales. En las manos de Portugal y de sus aliados, los territorios africanos servían de baluarte y de plazas de armas. Los representantes de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la República Federal de Alemania se esforzaban por someter a su influencia a sus jóvenes aliados, para impedirles tomar medidas contra los regímenes de Verwoerd, de Salazar y de Ian Smith. En la declaración del Secretario de Estado norteamericano, mencionada antes, se podían leer igualmente que sacrificar los intereses de Portugal uniéndose de una manera o de otra con las Naciones Unidas para condenar a Portugal no podía llevar más que a una catástrofe. El representante de la URSS citó también un artículo del diario *Le Monde*

relativo a una declaración del Ministro de Justicia de la República Federal de Alemania, según la cual la política de Portugal en sus territorios de ultramar siempre había sido y seguía siendo la política más moderna puesta en práctica por un país de Europa. *The New York Times* había publicado recientemente una declaración del Ministro portugués de Relaciones Exteriores subrayando que como consecuencia de negociaciones llevadas a cabo con estadistas norteamericanos todo parecía indicar que los Estados Unidos habían adoptado una actitud más realista en lo que se refería a la política de Portugal en sus territorios africanos.

593. No había ayuda que pudiera salvar del derrumbamiento al imperio colonial portugués, como lo probaba la lucha cada día más encarnizada que desarrollaban las poblaciones africanas que se encontraban bajo el yugo colonial portugués para que se reconocieran sus derechos inalienables. El citado representante se congratuló de las victorias obtenidas en el curso de esta justa lucha y de la liberación de ciertas regiones, donde se organizaba una vida nueva basada en la democracia, la independencia y la libertad. Las Naciones Unidas y todos los países que se oponían a los regímenes coloniales debían conceder a los combatientes de la paz toda la ayuda moral y material posible. Había que hacer un llamamiento a los organismos especializados para que proporcionaran ayuda multilateral a las organizaciones y a los movimientos nacionalistas, en la esfera de la educación y de la salud, por ejemplo. El Comité Especial debía condenar el bloque de los colonizadores compuesto de Portugal, de Rhodesia del Sur y de Sudáfrica, así como los miembros de la OTAN que acudían en ayuda de Portugal. Debía pedir al Consejo de Seguridad que tomara medidas concretas para garantizar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y que hiciera obligatorias las sanciones previstas. El Consejo de Seguridad debía exigir a Portugal que retirara sus fuerzas armadas de los territorios bajo su dominio y desmantelara sus bases e instalaciones militares. Convenía también recomendar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General que fijaran una fecha para la independencia de las colonias portuguesas. La Unión Soviética apoyaría el proyecto de resolución si se tenían en cuenta estas observaciones. Para terminar, el representante de la Unión Soviética destacó una noticia muy importante que acababa de llegarle de Nueva York. La Secretaría de las Naciones Unidas había anunciado, en un comunicado de prensa, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) había concedido a Portugal dos préstamos por valor de 30 millones de dólares, con el fin de permitirle ampliar su red de centrales eléctricas. Estos préstamos iban en contra de las decisiones del Comité y de la Asamblea General y de la resolución 2107 (XX) que hacía un llamamiento al Banco para que se abstuviera de prestar a Portugal cualquier ayuda financiera económica o técnica mientras el Gobierno de ese país no aplicara la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El Comité debía examinar la decisión del Banco y pedir que se anulara.

594. El representante de Dinamarca observó con pesar que la situación apenas había evolucionado desde de 1965. El responsable de esta lamentable situación era Portugal, que se obstinaba en desarrollar una

política colonial anacrónica y desastrosa. El Gobierno de Dinamarca condenaba absolutamente la política de Portugal, que era indigna de la época actual. Dinamarca siempre se había sometido a la petición sobre el embargo de armas que figuraba en la resolución del Consejo de Seguridad de 31 de junio de 1963. Lamentaba que todos los países no hicieran lo mismo. Independientemente de toda consideración moral, todos los países del mundo debían darse cuenta de que la situación en los territorios bajo dominación portuguesa podía tener consecuencias de extrema gravedad.

595. No era necesario extenderse más sobre las actividades de los colonialistas portugueses. Los miembros del Comité ya estaban ampliamente informados a este respecto. Pero no había que dejar de asombrarse cada vez que el Gobierno de Lisboa repetía que reinaba la calma en los territorios portugueses. Muchos testimonios habían revelado a la opinión mundial lo que ocurría en los territorios administrados por Portugal; además, el propio Gobierno de Portugal había confirmado que las poblaciones autóctonas le oponían una seria resistencia. En diciembre de 1965, Salazar había declarado que uno de los problemas esenciales con los que debía enfrentarse Portugal era la defensa de la integridad del territorio nacional, y que no era posible prever por cuánto tiempo aún el Gobierno y el pueblo portugueses tendrían que defender sus territorios de ultramar. Esto era lo mismo que decir que los africanos continuaban privados de sus derechos más elementales y que proseguía la lucha armada de Portugal contra las poblaciones autóctonas. Se trataba, en opinión del representante de Dinamarca, de un callejón sin salida, pues la tendencia era hacia la libre determinación.

596. El representante de la India dijo que la situación en los territorios bajo dominación portuguesa se venía examinando desde hacía largo tiempo en varios de los órganos de las Naciones Unidas. Mientras en la Organización había habido una preponderancia de las Potencias coloniales y de los países que las apoyaban, Portugal había podido eludir todo examen crítico de su política. Al final del decenio de 1950 y sobre todo a partir de 1960, había cambiado la situación, al conseguir muchos países de África y Asia la independencia y la admisión en las Naciones Unidas. Desde entonces Portugal no había podido ya contar con la protección de sus aliados, al menos en los debates.

597. Era, sin embargo, en extremo lamentable que, pese a las continuas exhortaciones de las Naciones Unidas a Portugal para que modificara su política y reconociera el triunfo ineludible de la lucha de todos los pueblos coloniales por la libertad, no hubiera cambiado la suerte de los pueblos sometidos de los territorios portugueses. Era evidente incluso, según el testimonio de los peticionarios en Dar es Salaam y en Argel, que la situación en los territorios portugueses había empeorado y que la represión se había hecho más implacable. Sólo cabía maravillarse ante el ingenio de las autoridades coloniales para idear nuevos métodos todavía más inhumanos de reprimir la lucha legítima del pueblo bajo dominio portugués. Las palabras apenas bastaban para expresar el sufrimiento de ese valeroso pueblo; y los indios podían muy bien comprender esa angustia porque ellos mismos habían padecido la tiranía del colonialismo portugués.

598. A pesar de ser un país pequeño y atrasado, Portugal podía desafiar a las Naciones Unidas y se-

guir oprimiendo al pueblo de sus territorios, cuya extensión era muchas veces superior a la de Portugal. Había dos factores que explicaban esta situación.

599. El primero era la vergonzosa e impía alianza entre las fuerzas del colonialismo en África meridional, donde los regímenes dictatoriales de Sudáfrica, Rhodesia del Sur y los territorios portugueses actuaban de consuno para perpetuar la supremacía blanca en esa parte del mundo. Los gobernantes de esos territorios comprendían muy bien que su fuerza residía en la unión. La prontitud con que las autoridades de Portugal y de Sudáfrica habían acudido en ayuda del régimen racista de Rhodesia del Sur era una prueba clara de la complicidad entre los tres baluartes del colonialismo, a los que había que tratar como una sola entidad.

600. La segunda razón era la ayuda directa e indirecta que Portugal seguía recibiendo de sus aliados y amigos. Sin esa asistencia, nunca habría podido llevar a cabo las operaciones militares en masa que tenía que desarrollar para mantener a sus colonias bajo su dominio. Un estudio llevado a cabo por el Subcomité I del Comité Especial había puesto claramente en evidencia la estrecha relación que existía entre el dominio colonial y la explotación económica por intereses extranjeros. Varios países además de Portugal participaban en esta empresa que ofrecía beneficios importantes aunque injustos. Se había afirmado en ciertos medios que las actividades económicas de estos intereses extranjeros no hacían sino contribuir al bienestar de los habitantes indígenas. Los que recurrían a una justificación tan débil contaban ciertamente con la ingenuidad de los demás. Los amigos y aliados de Portugal se habían mostrado muy reacios a colaborar con las Naciones Unidas en la aplicación de medidas prácticas. Evidentemente se sentían satisfechos con simples declaraciones hipócritas de altos principios.

601. El dictador de Portugal había dicho frecuentemente con toda claridad que nunca cedería su dominio de esos territorios. El partido en el poder, la Unión Nacional, había declarado que, costara lo que costara, Portugal nunca abandonaría la defensa legítima de su territorio nacional contra la agresión extranjera. En una entrevista celebrada el 4 de agosto de 1965 el dictador portugués había dicho: "Lo cierto es, sin embargo, que como resultado de la integración, principio por el que se guía desde hace siglos la política portuguesa de ultramar, esos territorios, en su conjunto, constituyen ya una nación y un Estado soberano... Si bien puede existir un problema cuando se trata de territorios dependientes o colonias que desean lograr la independencia y definir sus relaciones con el Estado que ejerce sobre ellos derecho de soberanía, tal problema no existe en el caso de Portugal". Las razones que movían a Portugal a aferrarse tan desesperadamente a sus colonias de ultramar eran claras. La guerra africana había aportado grandes beneficios a Portugal, puesto que sus industrias crecían para atender pedidos militares que iban desde municiones hasta productos alimenticios y textiles, y las remesas enviadas por las tropas de ultramar inyectaban nuevo dinero en la economía portuguesa.

602. La Asamblea General, en su resolución 2107 (XX), había condenado la política del Gobierno de Portugal que violaba los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamien-

to, en gran escala, de inmigrantes extranjeros en los territorios y la exportación de mano de obra a Sudáfrica. El asentamiento de europeos había sido la base fundamental de la política colonial portuguesa. Las autoridades portuguesas creían, y querían que el mundo entero creyera, que una mayor inmigración de blancos contribuiría a acelerar el progreso social y cultural de la población autóctona "menos avanzada", al ponerla en contacto más estrecho con pueblos "más civilizados". Había aumentado en la Asamblea Nacional portuguesa la presión sobre las autoridades para enviar más colonos a los territorios de ultramar, paralelamente al esfuerzo militar. Un diputado de Mozambique había propuesto que el Gobierno fomentara el asentamiento de los soldados en los territorios. En 1965, las autoridades de Mozambique ofrecían granjas de 5.000 hectáreas en el distrito de Tete a agricultores de las zonas sudafricanas afectadas por la sequía. En noviembre de 1965 se había comunicado que ochenta agricultores sudafricanos habían firmado ya el contrato correspondiente. Todo esto se llevaba a cabo desafiando abiertamente la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General. Por tanto, se había de condenar firmemente una vez más a Portugal a ese respecto.

603. Había pobreza y miseria entre los africanos de los territorios portugueses, donde se seguía aplicando el trabajo forzoso. El hambre reinaba por doquier y prácticamente no existían posibilidades de educación para los africanos. Por ejemplo, en Mozambique sólo el 0,35% de la población africana asistía a la escuela primaria y sólo el 0,05% de la población cursaba estudios secundarios. La política evidente de la Potencia colonial era mantener a la población africana en una servidumbre económica y social.

604. Una excusa a la que recurrían con frecuencia algunos gobiernos que se negaban a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a los territorios portugueses era que las sanciones perjudicarían a los africanos más que a nadie. Ese argumento no era más que un intento de eludir la cuestión; porque la población de los territorios portugueses se había declarado constantemente dispuesta a sufrir cuantas penalidades fueran necesarias para alcanzar su independencia. Si los aliados de Portugal fueran sinceros en su pretendida preocupación por los intereses de la población autóctona de los territorios portugueses deberían cumplir las resoluciones de la Asamblea General en su totalidad y prontamente a fin de que terminara sin más demora el dominio opresor de Portugal. La historia del colonialismo y la experiencia de los países recién independizados demostraba que la independencia política era un requisito previo para el progreso económico.

605. La delegación de la India había advertido hacía ya varios años al Comité Especial que si no se reconocía a la población de los territorios portugueses su derecho a la libertad no quedaría más solución que recurrir a la violencia. Era lamentable que el único idioma que Portugal entendía fuera el de la fuerza. En Angola los nacionalistas se habían declarado en abierta rebelión en marzo de 1961; en Mozambique los combatientes nacionalistas habían iniciado su lucha armada en septiembre de 1964; y en la Guinea llamada Portuguesa las fuerzas de la libertad y del progreso habían logrado éxitos importantes en su lucha contra las autoridades coloniales. Las propias autoridades portuguesas admitían la presencia de unos

50.000 soldados portugueses, que componían las fuerzas armadas, y la policía móvil y la milicia, sólo en Mozambique. Esas tropas, totalmente adiestradas y equipadas con las armas más modernas, luchaban contra un pueblo mal alimentado y mal equipado. Sin embargo, esas fuerzas imperialistas eran incapaces de conseguir resultados favorables en su lucha contra los combatientes de la libertad, que tenían de su parte la justicia y la verdad.

606. La delegación india había apoyado y patrocinado todas las resoluciones relativas al problema de los territorios bajo administración portuguesa en el pasado y lo seguiría haciendo así, porque a su juicio podía encontrarse una solución pacífica del problema si toda la comunidad internacional unía sus fuerzas contra ese régimen dictatorial obstinado y despiadado. El Consejo de Seguridad podía desempeñar un papel importante y ya había establecido, en su resolución 218 de 23 de noviembre de 1965, que la actitud de Portugal hacia la población africana de sus territorios y hacia los Estados vecinos constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Debía, pues, actuar de conformidad con su anterior decisión y tomar medidas, como por ejemplo sanciones económicas obligatorias, contra Portugal. La delegación india deseaba que esa disposición se incluyera en el proyecto de resolución que se presentara al Comité.

607. La India condenaba los brutales métodos de represión empleados por las autoridades portuguesas y reconocía la legitimidad de la lucha del valeroso pueblo de los territorios portugueses por su independencia. Había ofrecido su plena colaboración a la Organización de la Unidad Africana (OUA) para poner fin al colonialismo portugués y haría debidamente todo cuanto estuviera en su poder para ayudar a esos intrépidos soldados de la libertad. El Ministro indio de Relaciones Exteriores había dicho: "Siempre hemos trabajado, de modo persistente y constante, para poner fin a los últimos vestigios del colonialismo y creemos que, habiendo alcanzado nosotros mismos la independencia del dominio colonial, es también nuestro deber — y ningún sacrificio nos parecerá demasiado grande para ello — asumir las responsabilidades y obligaciones que nos incumben hacia aquellos hermanos que todavía padecen bajo el dominio extranjero".

608. El representante de Bulgaria dijo que el testimonio de los peticionarios de Mozambique, de Angola y de la Guinea llamada Portuguesa había demostrado plenamente la imperiosa necesidad de que el Comité Especial se reuniera periódicamente en Africa.

609. La delegación de Bulgaria había quedado profundamente impresionada por el nuevo impulso que tomaba la lucha de los pueblos que todavía sufrían bajo la dominación extranjera. El representante de Bulgaria estaba emocionado ante la fe y la determinación con que los combatientes de la libertad — no contentos con sostener una valerosa lucha armada — emprendían la labor de edificación de su futuro Estado independiente. Era alentador oír las declaraciones de los peticionarios, que hablaban de los esfuerzos ya iniciados en las partes liberadas del territorio para luchar contra el analfabetismo y la enfermedad y para edificar, basándose en los antiguos valores culturales de su pueblo, una civilización y una sociedad nuevas fundadas en la democracia, la justicia y el progreso social.

610. Los representantes de los territorios bajo dominación portuguesa habían manifestado de modo emocionante su agradecimiento a los gobiernos y a los pueblos que les ayudaban. La delegación de Bulgaria se había sentido especialmente conmovida por las expresiones de gratitud del Secretario General del Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), el Sr. Cabral, que al referirse a la ayuda de los países socialistas había declarado que la solidaridad de estos países con los pueblos que luchaban contra el dominio portugués daban una dimensión nueva a la idea de solidaridad entre los pueblos. Dio las gracias a los peticionarios por los sentimientos que acababan de expresar respecto de la asistencia que les aportaba Bulgaria; deseaba asegurarles que contaban con la simpatía y el apoyo incondicional de todo el pueblo búlgaro.

611. El representante de Bulgaria estimaba que Salazar sólo había podido desarrollar su criminal actividad fascista gracias a la ayuda que le concedían los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y otros países occidentales, entre ellos, claro estaba, los que formaban parte de la OTAN. La indignación de los pueblos oprimidos era tanto más legítima cuanto que esos países hacían declaraciones hipócritas de simpatía hacia ellos mientras seguían ayudando activamente al régimen colonialista de Salazar. No se podía insistir demasiado a ese respecto en el odioso papel que desempeñaba la República Federal de Alemania que, al parecer, no había sido capaz de aprender la lección de la segunda guerra mundial, como el mundo tenía derecho a esperar. Felizmente existía otra Alemania, la República Democrática Alemana, Estado pacífico y democrático, que podía sentirse orgulloso de contarse entre los amigos más fieles de los pueblos que luchaban contra el colonialismo y el imperialismo.

612. A juicio del representante de Bulgaria, la sugestión de los peticionarios relativa a la función que podían desempeñar las Naciones Unidas era especialmente importante. Los peticionarios apreciaban, según parecía, en su justo valor la resolución 2107 (XX), pero habían sentido gran decepción ante los resultados prácticos de la aprobación de esta resolución. Los peticionarios, por desgracia, tenían razón: en efecto, el colonialismo se desencadenaba de nuevo; contaba con aliados y declaraba abiertamente que no tenía intención de aplicar ni una sola de las disposiciones de la resolución 2107 y mucho menos los párrafos 7 y 8 de la parte dispositiva. Era, pues, evidente que no bastaban los llamamientos lanzados por el Consejo de Seguridad.

613. El representante de Yugoslavia dijo que la situación de los territorios portugueses no había cambiado a pesar de las exhortaciones de las Naciones Unidas, en forma de resoluciones y peticiones concretas a Portugal. Lo más lamentable era que la población seguía privada de sus derechos fundamentales a la libertad y a la independencia. En Dar es Salaam los peticionarios habían declarado que en un breve espacio de tiempo el número de tropas portuguesas había pasado, en Mozambique solamente, de unos 35.000 a 50.000 y que esa cifra llegaría probablemente a 75.000 a fines de 1966. Además, las tropas portuguesas en Guinea utilizaban armas nuevas y mejores. Esas nuevas tropas, las nuevas armas y la represión cada vez más intensa demostraban la intención de Portugal de

aferrarse a sus territorios. En realidad, había declarado que nunca abandonaría la defensa de los territorios, legítimamente suyos, contra la agresión exterior.

614. Sin embargo, para mantener sus operaciones militares Portugal confiaba en sus amigos y aliados que hacían caso omiso de las exhortaciones de las Naciones Unidas y seguían ayudando a Portugal con objeto, sobre todo, de sacar los máximos beneficios de sus inversiones. Les interesaba por tanto mantener el *statu quo*.

615. Habían fracasado todos los esfuerzos de Portugal para aplastar el firme avance de las fuerzas nacionalistas. Incumbía a todos, y especialmente a los aliados de Portugal, la responsabilidad de obligar a ese país a modificar su miopía política; y era deber del Comité Especial recomendar medidas en ese sentido a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución reflejaba las opiniones de Yugoslavia y merecía el apoyo unánime del Comité.

616. El representante de Siria dijo que no deseaba extenderse sobre las atrocidades que estaba cometiendo el régimen reaccionario del Dr. Salazar contra los pueblos inocentes de Mozambique, Angola y Guinea. Las pruebas presentadas por los peticionarios, los documentos de trabajo objetivamente exhaustivos de la Secretaría de las Naciones Unidas y el testimonio de personalidades africanas y europeas, incluso portuguesas, cuya conciencia se rebelaba contra la injusticia, mostraban claramente que el colonialismo portugués estaba intensificando su comportamiento despiadado, su desafío a la opinión mundial y su fanatismo antiafricano e inhumano. Portugal sostenía cínicamente que los naturales de Mozambique, Guinea y Angola se habían convertido, sin duda por decreto, en portugueses. ¿Por qué milagro podría un pueblo con su propia historia, su propia geografía, su propia sociedad y sus propias tradiciones y cultura, transformarse en otro? Esta colonización de las almas humanas se movía de los principios esenciales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Un régimen pervertido profesaba desvergonzadamente hablar en nombre de la civilización; pero en nombre de la civilización arrojaba bombas de napalm con los aviones militares más modernos sobre aldeas africanas inocentes. En nombre de la civilización mantenía al 99,7% de los africanos de Guinea en el analfabetismo, y en nombre de la civilización instaba a colonos portugueses para usurpar las tierras y los bienes africanos. La condenación más decidida de estos actos era naturalmente un deber principal al que ningún miembro del Comité podía oponerse lógicamente.

617. En la lucha de vida o muerte de estos valerosos pueblos africanos, sólo podía haber una opción fundamental: ser amigo o enemigo de África. Los que eran amigos de Portugal no podían de ninguna manera ser amigos de África. Una vez que este axioma se tradujera en acción, se habría avanzado hacia una solución satisfactoria. Sólo entonces sabrían los partidarios declarados o tácitos de Portugal que su alianza implicaba necesariamente perder la amistad de África. Entonces el régimen de Salazar quedaría aislado, en cuyo caso sus días quedarían contados, o conservaría el firme apoyo de muchos amigos leales. En cualquier caso, la demarcación de las líneas de esa lucha legítima quedaría perfectamente clara.

618. El representante de Túnez declaró que su Gobierno había reunido una voluminosa documentación

sobre los Territorios bajo dominación portuguesa desde 1963, época en la que el Ministro tunecino de Relaciones Exteriores, en colaboración con sus homólogos de Liberia, Madagascar y Sierra Leona, había recibido de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno africanos el mandato de seguir de cerca la cuestión de esos territorios.

619. Por otra parte, fiel a las resoluciones aprobadas por la OUA y las Naciones Unidas, el Gobierno tunecino se había valido de su influencia con países acreditados ante él para llamar su atención sobre el carácter explosivo de la situación que existía en esos territorios. Finalmente, por convicción profunda y para aplicar las diversas resoluciones aprobadas sobre esa cuestión, Túnez nunca había vacilado en proporcionar asistencia cuantiosa e incondicional a todos los movimientos de liberación que habían acudido a él, y estaba dispuesto a seguir haciéndolo.

620. Durante el tercer viaje del Comité a Africa, la delegación tunecina había quedado particularmente impresionada por la seriedad, la precisión y la moderación de los peticionarios. Deseaba expresarles la profunda solidaridad del Gobierno y del pueblo de Túnez y asegurarles su pleno apoyo. En sus respuestas a las preguntas que les habían hecho los miembros del Comité Especial, los peticionarios se habían mostrado dignos y libres de rencor o de odio. Habían proporcionado una nueva prueba de la madurez de los representantes auténticos de los pueblos africanos que luchan por su independencia. El Sr. Mondlane, por Mozambique, y el Sr. Cabral, por la Guinea llamada Portuguesa, eran ejemplos vivientes de la dignidad a que se refería el representante de Túnez.

621. El problema colonial que planteaba la Guinea llamada Portuguesa era un problema de tipo muy particular. El Comité Especial debía por consiguiente encontrar medios particulares para luchar contra la obstinación moribunda del Gobierno portugués que continuaba negándose a toda solución pacífica que llevara a las poblaciones de esos territorios a la independencia. La delegación tunecina estaba convencida de que el proyecto de resolución presentado a los miembros del Comité Especial contenía elementos particularmente constructivos para la salvaguardia de los intereses de las poblaciones africanas de los territorios bajo dominación portuguesa. En efecto, no podía encontrarse una sola delegación que negara las verdades consignadas en dicho proyecto. Si esas verdades parecían amargas a ciertas delegaciones, era lamentable; pero para ser fiel a sí mismo y a la misión que se le había confiado, el Comité Especial no podía pasarlas por alto, porque si lo hiciera, faltaría a su deber y decepcionaría a los millones de seres que habían puesto toda su esperanza en las Naciones Unidas.

622. Túnez seguiría reclamando la adopción de medidas concretas y realistas que permitieran aportar una ayuda efectiva a las poblaciones africanas oprimidas. Túnez siempre había actuado en ese sentido y seguiría haciéndolo mientras Portugal persistiera en oponerse a la aplicación integral de las resoluciones de las Naciones Unidas y mientras una parcela de territorio africano permaneciera bajo dominación extranjera.

623. El representante del Irán dijo que la situación en los territorios portugueses había ido de mal en peor. La opresión, la pobreza y la explotación cre-

cían diariamente, y los financieros portugueses prosperaban a expensas de la miseria africana. El hambre estaba muy difundida y prácticamente no existían medidas sanitarias; predominaba además una atmósfera de tensión e inseguridad.

624. Portugal estaba tratando de perpetuar su yugo de acuerdo con Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Ese país sólo podía negar el derecho de los africanos a la independencia mediante la represión; si no fuera así, una elección lo desalojaría de los territorios. Sin embargo, como los africanos no tenían acceso a la urna electoral, tenían que recurrir a las armas a fin de defender su dignidad y reafirmar su identidad. La mayoría del pueblo portugués se oponía a la política de su Gobierno, y el partido de oposición había defendido el principio del gobierno por la mayoría de la población en los territorios de ultramar. En todo caso, los días de Portugal en Africa estaban contados.

625. Terminó sugiriendo que se prestara ayuda a todos los movimientos nacionalistas por intermedio de organismos especializados como la UNESCO y la OMS.

626. El representante de Venezuela dijo que su país no aceptaba la afirmación de que los territorios portugueses en Africa fueran provincias ultramarinas de Portugal ni parte integrante de su territorio. La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era perfectamente aplicable a esos territorios. Venezuela condenaba la política colonial de Portugal, su actitud intransigente, su negativa obstinada a cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, su posición indefendible al negar los derechos inalienables del pueblo a la libre determinación, y su guerra colonial, que ya había ocasionado miles de muertes. Apoyaba sin reservas las aspiraciones del pueblo todavía sometido a la dominación colonial de Portugal y continuaría propugnando cualquier acción encaminada a poner fin a la situación anacrónica existente en los territorios. Por el contrario, se opondría a cualquier acción que limitara el mandato del Comité Especial o los poderes de otros órganos competentes, o que no estuviera de acuerdo con los términos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

627. Refiriéndose al proyecto de resolución (A/AC.109/L.313), dijo que su delegación estaba totalmente de acuerdo con la mayoría de sus párrafos. Sólo podría aceptar con reservas el sexto párrafo del preámbulo y los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva, y no podía votar a favor de los párrafos 6, 7 y 8 de la parte dispositiva. La actitud de su delegación a este respecto había sido explicada en ocasiones anteriores sobre todo al votarse la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General de fecha 21 de diciembre de 1965. Por lo tanto, agradecería que se decidiera votar dichos párrafos por separado, para que su delegación pudiera apoyar el resto del proyecto de resolución. También solicitó que la votación fuera nominal.

628. El representante de Italia dijo que cuando se examinaba el problema de los territorios portugueses, uno se preguntaba cómo podía existir todavía en 1966 un gobierno europeo y una opinión pública europea que creyeran posible mantener relaciones de tipo colonial entre una metrópoli y territorios tan alejados desde el punto de vista geográfico, étnico, económico y político.

629. Se trataba de una política superada que sólo podía tener consecuencias negativas y provocar in-

numerales sufrimientos a todos los interesados, ya se tratara de las poblaciones coloniales obligadas a tomar las armas para defender sus derechos, o de las familias del país europeo cuyos hijos eran enviados a África para librar una guerra impopular, injusta y sin esperanza. Por esta razón la delegación italiana, siempre que la cuestión de los territorios portugueses había sido examinada en las Naciones Unidas, había protestado contra la política colonial del Gobierno portugués. Por esta razón también, el Gobierno italiano había comunicado al Gobierno portugués que estaba muy preocupado ante los acontecimientos de los territorios portugueses y que deploraba su negativa a cooperar con las Naciones Unidas en ese terreno.

630. El Gobierno italiano había prohibido, además, toda exportación de armas con destino a Portugal y negaba toda forma de asistencia económica o técnica a ese país. El representante de Italia deseaba precisar a este respecto que, si se habían encontrado armas de origen italiano en los territorios bajo dominación portuguesa, las mismas habían llegado allí sin el consentimiento, e incluso contra la prohibición, del Gobierno italiano.

631. Algunos habían propuesto medidas radicales como la expulsión de Portugal de los organismos especializados y la aplicación de sanciones económicas y militares, así como la interrupción de todas las relaciones con Portugal dentro y fuera de la OTAN. Sin dejar de comprender los motivos y compartiendo el punto de vista de los que proponían tales medidas contra Portugal, el citado representante se veía en la obligación de expresar reservas en cuanto a las medidas que irían contra disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. En efecto, estimaba que la Organización no estaba todavía lo bastante desarrollada como para poner fin a la injusticia en todos los lugares a los que se extendía su influencia y para restablecer el orden público donde éste había dejado de existir.

632. El representante de Italia dio un ejemplo para precisar lo que acababa de decir. En 1965, durante el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, se había aprobado una resolución sobre los territorios portugueses a pesar de que no había habido más que 58 votos en su favor y un número casi igual de votos en contra y abstenciones. Entre los países que habían votado contra la resolución o que se habían abstenido, figuraban la Argentina, México, Austria, Chile, Finlandia, Jamaica, Noruega y Suecia, de los que nadie podía decir que estuvieran unidos a Portugal por una alianza o por lazos de simpatía. La aprobación de esa resolución había venido a dar la impresión de que el Gobierno portugués gozaba del apoyo de ciertas Potencias occidentales y latinoamericanas, lo que de ningún modo correspondía a la realidad. De hecho, Portugal, a pesar de pertenecer a la OTAN, para la que representaba un peso considerable, estaba aislado en el mundo y sus únicos aliados verdaderos eran Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

633. ¿Qué podía hacer el Comité Especial para facilitar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en los territorios bajo administración portuguesa? En primer lugar, debía continuar llamando la atención de la opinión pública mundial sobre el problema que representaba el mantenimiento de un sistema colonial caduco en África. En segundo lugar, las Naciones Unidas debían prestar a las poblaciones

de los territorios portugueses no sólo una ayuda material en forma de medicamentos, alimentos y ropas, sino también debían ayudarlas a preparar a los dirigentes que las gobernarían después que esos territorios hubieran logrado la independencia. En tercer lugar, debía invitarse a los países que, por razones históricas o geográficas, mantenían todavía relaciones con Portugal, a que manifestaran una vez más al Gobierno portugués su grave inquietud ante la situación existente en esos territorios. En cuarto lugar, debía invitarse a esos mismos países a que adoptaran medidas eficaces para impedir que el armamento proporcionado a Portugal como miembro de la OTAN y para la defensa de Europa occidental fuera utilizado para reprimir movimientos nacionalistas de liberación en las colonias portuguesas.

634. Antes de concluir, el representante de Italia deseaba hacer algunas observaciones a propósito del papel que, según algunos, desempeñaba la OTAN en el problema portugués. Los ataques dirigidos contra la OTAN durante este período de sesiones del Comité Especial no eran sino el resultado de una campaña de propaganda tendiente a desacreditar una alianza que había desempeñado un papel esencial en el mantenimiento de la paz internacional. El representante de Italia esperaba que los miembros africanos del Comité Especial sabrían distinguir entre la condena del colonialismo portugués que figuraba en el orden del día de ese Comité y la pequeña polémica dirigida contra la alianza atlántica. Deploraba que algunos hubieran creído conveniente servirse de esa tribuna y del debate sobre un tema tan serio como la situación de los territorios portugueses para plantear problemas que se referían al equilibrio militar y político europeo y que no tenían nada que ver con la cuestión objeto de examen.

635. El representante de Australia dijo que su Gobierno rechazaba la política actual de Portugal y apoyaba el principio de la libre determinación. Le preocupaba el que Portugal no hubiera cumplido las obligaciones que le imponía la Carta y su negativa a facilitar información a las Naciones Unidas sobre los territorios bajo su control. El Gobierno de Australia no había vacilado en expresar al Gobierno portugués su preocupación y desacuerdo. Australia no proporcionaba armas ni equipo militar a ese país. Se oponía implacablemente al trabajo forzado, a la restricción de las libertades cívicas y a la limitación del derecho al voto, que Portugal perpetuaba en esos territorios.

636. Durante las sesiones del Comité Especial en Dar es Salaam y Argel, el citado representante había planteado ciertas cuestiones políticas a los peticionarios, y había quedado impresionado por las respuestas, cuyo contenido había sido fundamentalmente el mismo en ambos lugares. Había quedado con la impresión y la esperanza de que había mucho terreno fértil que el Gobierno portugués podía cultivar para la felicidad y prosperidad de los países y las poblaciones interesadas.

637. La representante de los Estados Unidos de América recordó que en Dar es Salaam la última vez que el Comité Especial había examinado la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa, ella había resumido los principales elementos de la política de los Estados Unidos en esa cuestión. Esta política había sido expuesta plena y francamente en

la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad y en el Comité, y también directamente en Washington y Lisboa al Gobierno portugués.

638. El Gobierno de los Estados Unidos había demostrado claramente que no estaba de acuerdo con la política de Portugal respecto a sus territorios. Sostenía que éstos eran evidentemente territorios no autónomos y estaban sujetos a las disposiciones del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos de América habían instado repetidamente a Portugal a que cumpliera sus obligaciones como Potencia administradora tanto en la administración territorial como en lo que se refería al envío de información al Secretario General de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos apoyaban plenamente el derecho del pueblo de los territorios a una libre determinación plena y auténtica: los habitantes debían ser libres de elegir el tipo de instituciones y formas de gobierno bajo las cuales desearan vivir. La representante de los Estados Unidos no creía que la libre determinación significara el acuerdo y el consentimiento de la población únicamente sobre una particular estructura política o administrativa, o sobre cierto tipo de Estado, y había instado a Portugal a que aceptara el principio de la libre determinación y lo pusiera en práctica. No había ninguna medida que pudiera contribuir más que ésta a la solución pacífica del problema: la misma permitiría salir del actual punto muerto, lleno de peligros y que, si no era superado por el consentimiento, lo sería por la violencia. Correspondía al Comité explorar los medios razonables por los que dicho proceso podría realizarse en forma pacífica.

639. Una medida que el Consejo de Seguridad había estimado conveniente era impedir la exportación a la Potencia administradora de armas destinadas al empleo en sus territorios africanos, y esta cuestión había sido objeto de extensos debates en el Comité. Como Portugal era un miembro de la OTAN, el debate había ofrecido una oportunidad a ciertos miembros que, por razones no relacionadas con el bienestar de los pueblos de los territorios, deseaban atacar a dicha organización. En lo que se refería a su Gobierno, la citada representante podría afirmar inequívocamente que la OTAN como organización no proporcionaba armas a Portugal para que las empleara en sus territorios. También declaraba que los Estados Unidos, de acuerdo con el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución del Consejo de Seguridad del 31 de julio de 1963, no proporcionaba ni permitía exportar a ese país armas o equipo militar destinados al empleo en los territorios. Asimismo, había prohibido durante muchos años tal suministro a menos que hubiera garantías concretas de que el material no tendría ese uso. Esta era la política firme y públicamente declarada que los Estados Unidos continuarían aplicando.

640. Varios peticionarios habían citado el uso por Portugal de equipo militar supuestamente producido en los Estados Unidos. La representante de los Estados Unidos había explicado en Dar es Salaam que esas armas eran modelos de la segunda guerra mundial, que podían obtenerse en todo el mundo, y habían formado parte de las existencias de varios países durante muchos años. Repitió que las mismas no podían obtenerse en los Estados Unidos para ser usadas en los territorios.

641. Su delegación lamentaba que Portugal recurriera a la violencia en la zona y particularmente que bombardeara aldeas y personas indefensas. Señaló, sin embargo, que el período citado por el ex piloto portugués — del 21 de julio de 1961 al 10 de febrero de 1963 — era anterior a la resolución del Consejo de Seguridad sobre la cuestión. También señaló que, a pesar de los intentos hechos por algunas delegaciones para persuadir a ese peticionario de que acusara a ciertos países de cooperación con Portugal en su política colonialista, el peticionario no lo había hecho.

642. El representante de la República Unida de Tanzania, refiriéndose a las declaraciones hechas por la delegación italiana y otras sobre la cuestión de los intereses financieros, dijo que para los africanos no se trataba de diferencias ideológicas: sólo estaban interesados en la causa de África y en la independencia. Los intereses financieros habían sido mencionados porque los peticionarios habían declarado repetidamente que dichos intereses contribuían a la guerra y proporcionaban a los portugueses los fondos necesarios para comprar armas. Era lamentable que algunas delegaciones hubieran intentado introducir argumentos ideológicos. El citado representante habría preferido que se negara la contribución de las compañías de los Estados Unidos y Europa occidental a una guerra que era causa de las matanzas perpetradas contra el pueblo africano. Se habían recibido pruebas, aun de los mismos portugueses, de las actividades de dichos monopolios extranjeros.

643. El representante de Italia había afirmado que la OTAN había desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la paz del mundo. El representante de Tanzania señaló que no había habido ningún conflicto en ninguna parte del mundo desde la segunda guerra mundial en que la OTAN hubiera intervenido para defender esa paz. Mientras existieran pruebas de que las armas de la OTAN se empleaban contra el pueblo africano éste seguiría planteando objeciones. El peticionario que se había presentado ante el Comité Especial el día anterior había demostrado que se habían suministrado armas de la OTAN a Portugal a un precio simbólico, y como dicho peticionario prestaba servicios en el ejército portugués en ese momento, había buenas razones para creer que lo que había dicho era verdad.

644. La reiteración por la representante de los Estados Unidos de que su Gobierno estaba de acuerdo con el principio de la libre determinación no era suficiente: lo que se deseaba era la aplicación de ese principio. El pueblo africano consideraba una contradicción sostener estar de acuerdo con ese principio y al mismo tiempo ayudar a la Potencia interesada en socavarlo.

645. A continuación citó un pasaje de un diario de la India titulado *Armas para Salazar*, donde se afirmaba que a principios de mayo de 1966 las autoridades aduaneras de los Estados Unidos habían descubierto una gran cantidad de armas destinadas ilegalmente a Portugal y habían detenido al piloto del avión en el que iban a ser enviadas, el cual se había defendido diciendo que actuaba no en su propio interés sino en el interés nacional. Este piloto había declarado ante el tribunal que era un agente de la CIA encargado del transporte de armas a Angola y Mozambique, y que también había entregado a Portugal siete bombarderos B-52 y otro equipo.

646. El representante de Tanzania dijo que lo que interesaba a su delegación no era que se declarara un embargo sobre las armas sino que se estableciera un control real y eficaz del envío de armas a Portugal. La representante de los Estados Unidos había afirmado que las armas que su Gobierno proporcionaba a Portugal eran sólo para la defensa de Europa. Habían pasado veinte años desde la segunda guerra mundial y no había amenaza de guerra en Europa; sin embargo, se afirmaba que las armas enviadas a Portugal eran para su defensa.

647. La delegación de Tanzania desearía que los miembros del Comité que lo eran de la OTAN declararan que las armas de la OTAN nunca serían empleadas por Portugal contra el pueblo africano.

648. La representante de los Estados Unidos de América, comentando la declaración hecha por el representante de Tanzania, dijo que éste mismo había demostrado las medidas que habían sido adoptadas por los Estados Unidos de América para impedir la exportación de armas a los territorios portugueses. El hecho de que las personas implicadas habían tenido que recurrir a actos ilegales demostraba que su Gobierno seguía la política que había proclamado y que cualquier violación de la misma era perseguible ante los tribunales. Añadió que, en cuanto a la afirmación de que determinados organismos de los Estados Unidos habían colaborado con el piloto del avión, estaba autorizada por su Gobierno para desmentir categóricamente tal afirmación.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL²⁹

649. En la 452a. sesión, Afganistán, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución (A/AC.109/L.313).

650. Al presentar el proyecto de resolución en nombre de los patrocinadores, el representante de la India dijo que el párrafo 4 de la parte dispositiva reflejaba el punto de vista expresado por una gran mayoría de los miembros del Comité Especial y por los peticionarios que se habían presentado ante el mismo. Era bien sabido que la asistencia que recibía Portugal de los intereses financieros era uno de los principales puntales de su obstinación, y los redactores de la resolución habían considerado necesario expresar su enérgica desaprobación a dicha asistencia.

651. La otra idea nueva era la que figuraba en el párrafo 6 de la parte dispositiva, que recomendaba al Consejo de Seguridad que impusiera a todos los Estados la obligación de aplicar las medidas que figuraban en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1965, en particular las que se mencionaban en el párrafo 7 de la misma, que el representante de la India leyó en alta voz. Desde hacía mucho tiempo se había insistido en la imposición

de esas medidas con carácter voluntario, pero la reacción de algunos Estados Miembros había causado amarga decepción. El Consejo de Seguridad debía asumir la función vital que se le había encomendado en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Si daba carácter obligatorio a dichas medidas, se habría eliminado la excusa de los amigos y aliados de Portugal de que no podían dictar la actuación de sus nacionales.

652. Quizá algunas delegaciones tuvieran recelos acerca del sexto párrafo del preámbulo. Sin embargo, el citado representante señaló que la existencia de una amenaza a la paz y la seguridad internacionales como consecuencia de la política de Portugal ya había sido confirmada por el Consejo de Seguridad, y que la referencia al agravamiento de la situación como resultado de la rebelión racista en Rhodesia del Sur era un mero reconocimiento de los hechos.

653. Algunas delegaciones habían considerado poco realista que el Comité Especial recomendara medidas de difícil aceptación y aplicación por todos. Los autores creían, sin embargo, que el Comité no debía desalentarse ante los obstáculos puestos a la aplicación de medidas eficaces contra Portugal, y que era su deber continuar en el intento de persuadir a los que no habían podido hasta entonces apoyar esas medidas, a que se dieran cuenta de sus errores y se unieran a los demás. En cuanto a la sugerencia de que dichas medidas usurparían funciones del Consejo de Seguridad, señaló que el Comité Especial no hacía más que recomendar la aplicación de sanciones obligatorias contra las amenazas a la paz y seguridad internacionales ya confirmadas por el Consejo de Seguridad en su resolución 218 (1965).

654. La situación reinante en los territorios de dominación portuguesa era grave, y continuaba empeorando. El valeroso pueblo que la soportaba llevaba adelante su lucha contra pesados obstáculos, pero Portugal habría de perder al fin. Los patrocinadores esperaban que dicho país lo comprendiera así y pusiera remedio a la situación antes que se hubiera derramado demasiada sangre, e inspirados por ese espíritu habían presentado el proyecto de resolución. El representante de la India esperaba que todos los miembros del Comité considerarían posible apoyarlo y aplicarlo plena e inmediatamente. Los patrocinadores recibirían complacidos toda sugerencia tendiente a mejorar el texto, pero debían rechazar las que pudieran debilitarlo.

655. El representante de Madagascar declaró, en nombre de los patrocinadores del grupo afro-asiático y de Yugoslavia, que el proyecto de resolución se esforzaba por cristalizar lo que los países africanos se creían en el derecho de esperar de la comunidad internacional para hacer frente al peligro que se cernía sobre los territorios administrados por Portugal y, por ende, sobre África y sobre el mundo entero. Los autores habían tratado de manifestar en dicho texto, una vez más, sus inquietudes y sus preocupaciones ante la situación de esos territorios. La consideraban "crítica" y "explosiva" porque estaban convencidos de que, si se prolongase, podría constituir una seria amenaza para la paz y la seguridad, que eran el objetivo y la razón de ser de las Naciones Unidas. El Comité Especial había podido escuchar testimonios sobre lo que ocurría en los territorios bajo dominación portuguesa: en estos territorios, cotidiano teatro de operaciones militares, se aplicaban medidas represivas que causaban gran número de víctimas entre la población

²⁹ En el capítulo I de este informe se consignan las medidas adoptadas por el Comité Especial sobre la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa en relación con las resoluciones 2105 (XX) y 2107 (XX) de la Asamblea General. Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) para un resumen de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, sobre la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, en lo que respecta a los Territorios considerados por el Comité Especial durante sus reuniones en África.

civil. Portugal había adoptado la costumbre de repetir constantemente que no había guerra en los territorios que ocupaba. Al hacerlo, no sólo negaba la verdad, sino que fomentaba el derramamiento de sangre; y era imposible permanecer indiferente ante el número cada vez mayor de víctimas que caían bajo las balas portuguesas. El proyecto de resolución ponía también de relieve la inquietud de sus autores ante la presencia de ciertos intereses financieros que operaban en los territorios bajo la dominación portuguesa, en beneficio solamente de Portugal y no de la población africana.

656. No era por rutina que los autores del proyecto de resolución habían querido en especial reafirmar en ella el derecho inalienable de estas poblaciones a la libre determinación y la independencia. Sabido era cómo pretendía definir Portugal el término "libre determinación". Esta cuestión había sido objeto de prolongados debates tanto en el Consejo de Seguridad como en otros órganos de las Naciones Unidas. Bastaba recordar que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocían por unanimidad que la tesis de Portugal se distinguía por la mala fe en la que estaba inspirada.

657. Ante la persistente negativa de Portugal de ajustarse a la razón y al sentido común, los autores del proyecto de resolución habían deseado asimismo reafirmar su actitud en cuanto a la legitimidad de la lucha que, a pesar suyo, libraban los habitantes de estos territorios, sólo con miras a recobrar su soberanía y su independencia. Era evidente que los autores del proyecto no tenían el propósito de dar así vía libre a la violencia y a la efusión de sangre, sino simplemente deseaban subrayar que las poblaciones de estos territorios se habían visto obligadas a recurrir a la fuerza para hacer frente a una guerra que les había impuesto Portugal. Antes de tomar las armas, los representantes de estas poblaciones habían ensayado todos los medios para encontrar un terreno de entendimiento con Portugal. Este país no sólo se les había opuesto con una intransigencia total, sino que además había desencadenado operaciones militares y represivas contra la población local. En el mismo orden de ideas, y ante la intensificación de los ataques de que era objeto la población civil, los autores del proyecto se habían inclinado a expresar su inquietud ante la asistencia y las armas que recibía Portugal de sus aliados, y que utilizaba contra las poblaciones de los territorios sometidos a su dominación. Por este motivo, hacían una vez más un llamamiento a los aliados de Portugal para que reconsideraran su actitud y adoptaran las medidas enunciadas en el párrafo 7 del proyecto. Por otra parte, la casi totalidad de los peticionarios que habían escuchado los miembros del Comité en el curso del presente período de sesiones habían confirmado que, efectivamente, Portugal utilizaba armas y material de guerra recibidos de sus aliados.

658. Del mismo modo, los autores del proyecto no habían querido dejar pasar en silencio la política odiosa de la Potencia ocupante, que facilitaba la inmigración de extranjeros en dichos territorios con fines no menos censurables. Esta política de asentamiento indicaba con claridad que Portugal estaba firmemente decidida a mantener su influencia sobre los territorios sometidos a su dominación, a perpetuar su política de atrocidades y a continuar persiguiendo a inocentes cuyo único delito era reivindicar su libertad y su independencia.

659. A la luz de las observaciones del representante de la India y de las que había formulado el propio representante de Madagascar en nombre de los miem-

bro del grupo afroasiático y de Yugoslavia, este último estimó que el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313) quedaba plenamente justificado. Esperaba que todos los miembros del Comité hostiles a la guerra y a la efusión de sangre, todos los que profesaban la tolerancia y la libertad y trataban de promover la comprensión y la fraternidad de los pueblos tendrían a bien aportar su contribución al esfuerzo común aislando a Portugal del resto del mundo en tanto que el Gobierno de ese país no hubiera renunciado su abyecta política colonial.

660. El representante del Irak dijo que, al copatrocinar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313), relativo a los territorios portugueses que tenía ante sí el Comité, su delegación esperaba que el mismo se aprobara por unanimidad. El apoyo moral del Comité a la causa del pueblo africano en dichos territorios había de contribuir a la liberación de millones de personas que habían sufrido durante largo tiempo tratos inhumanos e innumerables indignidades.

661. El representante de Dinamarca dijo que, muy a su pesar, la delegación danesa no podría pronunciarse en favor del proyecto de resolución. En efecto, varios párrafos no le parecían aceptables. El párrafo 6 de la parte dispositiva, principalmente, era inaceptable puesto que el párrafo 7 de la resolución 2107 sobrepasaba con mucho la competencia de la Asamblea General. Además, la situación no parecía justificar medidas tan radicales. Por último, el séptimo párrafo del preámbulo y el párrafo 4 de la parte dispositiva exageraban el papel desempeñado por los intereses extranjeros.

662. Para terminar, dijo que dudaba que medidas tan radicales como las que se recomendaban en el proyecto de resolución pudieran servir de ayuda eficaz para las poblaciones autóctonas.

663. El representante de Bulgaria dijo que su delegación había expresado muchas veces la opinión de que sólo sanciones obligatorias contra los Miembros de las Naciones Unidas que violaran las resoluciones de las Naciones Unidas permitirían la aplicación del Capítulo VII de la Carta. Celebraba que en el proyecto de resolución se reflejara esta urgente necesidad. El párrafo 6 de la parte dispositiva especialmente lo ponía en evidencia de modo notable, puesto que subrayaba la obligación de todos los Estados, fueran o no miembros de las Naciones Unidas — el representante pensaba especialmente en la República Federal de Alemania —, de aplicar las medidas mencionadas en el párrafo 7 de la resolución 2107 (XX), que disponían, concretamente, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares y el boicot de todos los intercambios comerciales por Portugal.

664. Todos los peticionarios habían insistido en que las Naciones Unidas y más especialmente los organismos especializados podían ayudarles de modo eficaz. El Comité Especial había obrado, por tanto, acertadamente al preguntar a esas organizaciones cómo habían aplicado las resoluciones de la Asamblea General.

665. En el proyecto de resolución que tenía ante sí el Comité se pedía a los organismos especializados y en particular al Banco Internacional y al Fondo Monetario Internacional que se abstuvieran de conceder a Portugal ayuda financiera, económica o técnica. Además, se pedía a los organismos especializados que intensificaran la ayuda que concedían a los refugiados y a las víctimas de las operaciones militares. El representante de Bulgaria celebraba que el proyecto de resolución contuviera

tales disposiciones, ya que algunos de los organismos especializados mostraban poco entusiasmo por la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas relativa a la descolonización. Por eso sería conveniente tal vez redactar un texto todavía más explícito.

666. El citado representante consideraba que el proyecto de resolución representaría un paso adelante y permitiría ayudar más eficazmente a los que luchaban contra el colonialismo portugués. La delegación de Bulgaria daba las gracias a los autores del proyecto de resolución por su esfuerzo y votaría decididamente en favor del proyecto.

667. El representante de Siria dijo que, como no bastaba condenar a Portugal, el proyecto de resolución recomendaba con razón al Consejo de Seguridad que impusiera a todos los Estados Miembros la obligación de aplicar las medidas establecidas en el párrafo 7 de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General. Igualmente crucial era el párrafo 7 del proyecto de resolución, que pedía a todos los Estados, y en particular a los aliados militares de Portugal, que no enviaran armas al régimen, que no le proporcionaran material destinado a facilitar su propia producción de armas y que no le asistieran en ninguna otra forma. Los fundamentos de esta petición habían sido las claras pruebas que se habían presentado de que Portugal efectivamente recibía, directa e indirectamente, armas y equipo de ciertos Estados que, sin embargo, condenaban públicamente al régimen. Esta contradicción constituía el núcleo de la tragedia, la que se veía agravada por el apoyo entusiasta que prestaban al régimen empresas financieras en busca de ganancias rápidas e ilícitas.

668. El representante de Italia declaró que, a la luz de las consideraciones que había expuesto y teniendo en cuenta las instrucciones que acababa de recibir de su Gobierno, no podría apoyar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313). Ya había expresado su opinión respecto de los intereses económicos extranjeros, y se veía en la obligación de formular reservas muy serias en relación con los párrafos 6 y 7 de dicha parte dispositiva. El párrafo 6 se refería a una resolución de la Asamblea General que era considerada inconstitucional por muchos Miembros de las Naciones Unidas. Además, el representante de Italia no creía que la Asamblea General, ni ninguno de sus comités, pudiera recomendar medidas precisas al Consejo de Seguridad. Por otra parte, la formulación del párrafo 7 equivalía a imponer sanciones, decisión que correspondía exclusivamente al Consejo de Seguridad.

669. El representante de Australia dijo que su delegación no podía apoyar la totalidad del proyecto de resolución. Los tres últimos párrafos del preámbulo no daban una descripción adecuada y suficientemente equilibrada de los hechos para basar en ellos la parte dispositiva que seguía. El párrafo 4 de la parte dispositiva tenía los mismos efectos que el citado representante había señalado en Addis Abeba en la resolución sobre África Sudoccidental, es decir, que no se hacía ningún esfuerzo por diferencias entre los intereses comerciales que explotaban al pueblo y los que no lo hacían.

670. El párrafo 6 de la parte dispositiva contenía un elemento nuevo en el caso de los territorios portugueses que, sin embargo, era familiar al Comité en otros contextos. La delegación de Australia se veía obligada a oponerse a su formulación, que usurpaba funciones del Consejo de Seguridad y crearía una serie de circunstancias a las que Australia se oponía firmemente.

671. Lo mismo podía decirse del párrafo 7 de la parte dispositiva, que era quizá más importante, ya que el mismo llevaba ocultas implicaciones de gran alcance que iban más allá de la tragedia de los territorios portugueses. Por consiguiente, la delegación de Australia se abstendría de votar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313).

672. La representante de los Estados Unidos de América dijo que su delegación no creía que el lenguaje empleado o las medidas requeridas en el párrafo 7 del preámbulo y en el párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se justificaran aun en la grave situación que existía en los territorios portugueses. Tampoco podía estar de acuerdo con las declaraciones generales y doctrinarias recogidas en el párrafo 8 del preámbulo y en el párrafo 4 de la parte dispositiva sobre las inversiones extranjeras. La delegación de los Estados Unidos no podría apoyar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313).

673. El representante de Chile declaró que la actitud de su país no había variado. Desde hacía años Chile condenaba la política colonial de Portugal y apoyaba incondicionalmente los movimientos nacionalistas que tendían a constituir un gobierno honrado en los Territorios bajo dominación portuguesa. Añadió que su delegación no impugnaba el sexto considerando de la resolución pero su forma le inspiraba ciertas reservas. Se abstendría de votar sobre los párrafos 6, 7 y 8 de la parte dispositiva por razones que habían sido expuestas con frecuencia en la Asamblea General y en el Comité Especial.

674. En su 455a. sesión el Comité Especial votó sobre el proyecto de resolución (A/AC.109/L.313). El resultado de la votación fue como sigue:

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución fue aprobado en votación nominal por 20 votos contra ninguno. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Australia, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, India, Irak, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

El párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución fue aprobado en votación nominal por 15 votos contra 3 y 2 abstenciones. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Dinamarca, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Chile, Venezuela.

El párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra 2 y 3 abstenciones. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Chile, Dinamarca, Venezuela.

El párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución fue aprobado en votación nominal por 16 votos contra ninguno y 5 abstenciones. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Venezuela.

El proyecto de resolución en su totalidad (A/AC.109/L.313) fue aprobado en votación nominal por 18 votos contra 1 y 3 abstenciones. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Estados Unidos de América.

Abstenciones: Australia, Dinamarca, Italia.

675. La resolución relativa a la cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa (A/AC.109/187), aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, dice así:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo examinado nuevamente la cuestión relativa a Angola, Mozambique, la Guinea llamada Portuguesa y otros territorios bajo dominación portuguesa,

"Habiendo oído las declaraciones de los peticionarios,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en la que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Recordando asimismo las resoluciones 163 (1961) de 9 de junio de 1961, 180 (1963) de 31 de julio de 1963, 183 (1963) de 11 de diciembre de 1963 y 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965, aprobadas por el Consejo de Seguridad,

"Recordando además las resoluciones 1807 (XVII) de 14 de diciembre de 1962, 1819 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1913 (XVIII) de 3 de diciembre de 1963 y 2107 (XX) de 21 de diciembre de 1965, aprobadas por la Asamblea General,

"Profundamente preocupado por la crítica y explosiva situación, causada por la intensificación de las medidas de represión y las operaciones militares con-

tra el pueblo africano de estos territorios, y agravada por la rebelión de la minoría racista de Rhodesia del Sur, y que constituye una amenaza a la paz y a la seguridad,

"Observando con honda preocupación que las actividades de los intereses financieros extranjeros en esos territorios que impiden al pueblo africano realizar sus aspiraciones de libertad e independencia continúan sin disminuir,

"Observando también con honda preocupación que Portugal continúa utilizando contra la población de esos territorios la ayuda y las armas que recibe de sus aliados militares,

"1. Reafirma el derecho inalienable de la población de los territorios africanos bajo dominación portuguesa a la libertad y la independencia en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y reconoce la legitimidad de su lucha por conseguir este derecho;

"2. Condena la política colonial de Portugal y la continua negativa de ese país a aplicar las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad;

"3. Condena la política del Gobierno de Portugal que viola los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento en gran escala de inmigrantes extranjeros en los territorios y la exportación de mano de obra a Sudáfrica;

"4. Condena las actividades de los intereses financieros que operan en los territorios bajo dominación portuguesa, que explotan los recursos humanos y materiales y entorpecen el progreso de la población de los territorios hacia la libertad y la independencia;

"5. Hace un llamamiento a todos los Estados para que presten a la población de los territorios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y material necesario para la restitución de sus derechos inalienables e impidan que sus nacionales cooperen con las autoridades portuguesas, sobre todo en la esfera de las inversiones extranjeras;

"6. Recomendando al Consejo de Seguridad que imponga a todos los Estados la obligación de aplicar las medidas que figuran en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, en particular las que se mencionan en el párrafo 7 de la misma;

"7. Pide a todos los Estados, y en particular a los aliados militares de Portugal en la Organización del Tratado del Atlántico Norte que:

"a) Se abstengan inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal cualquier ayuda que le permita continuar su represión contra la población africana de los territorios bajo su dominación;

"b) Adopten todas las medidas necesarias para impedir la venta o el suministro de armas y equipo militar al Gobierno de Portugal;

"c) Suspendan la venta o envío al Gobierno de Portugal de equipo y material destinados a la fabricación o mantenimiento de armas y municiones;

"8. Hace un llamamiento a todos los organismos especializados, y en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se abstengan de prestar a Portugal cualquier ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portu-

gal no aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"9. *Pide* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a los organismos especializados interesados y a otras organizaciones internacionales de socorro que aumenten la ayuda que prestan a los refugiados de los territorios bajo dominación portuguesa y a las personas que han padecido y padecen aún a causa de las operaciones militares;

"10. *Decide* mantener en su programa la cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa."

676. El texto de la resolución se transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el 1º de julio de 1966⁹⁰.

PARTE II*

E. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INTERESES EXTRANJEROS ECONÓMICOS Y DE OTRA ÍNDOLE QUE OBSTACULIZAN LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES EN LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACIÓN PORTUGUESA

Introducción

677. En su 277a. sesión, celebrada el 3 de julio de 1964, el Comité Especial aprobó una resolución sobre los territorios bajo administración portuguesa (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 352). En el párrafo 7 de la parte dispositiva de esta resolución el Comité pide al "Subcomité I del Comité Especial que, con asistencia del Secretario General, examine las actividades de los intereses extranjeros económicos y de otra índole que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los territorios bajo administración portuguesa".

678. El Subcomité I examinó esta cuestión en noviembre de 1964 y en las sesiones celebradas entre el 19 de agosto y el 12 de octubre de 1965. Basándose en la información disponible, que comprendía dos documentos de trabajo preparados por la Secretaría (A/6000/Rev.1, cap. V, anexos I y II), el Subcomité formuló conclusiones y recomendaciones que posteriormente fueron aprobadas por el Comité Especial e incluidas en el capítulo V del informe que presentó a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

679. El Subcomité I continuó el examen de esta cuestión en las sesiones celebradas en agosto y septiembre de 1966, en las que tuvo a la vista otros documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase anexo, apéndices I a V). El 14 de septiembre de 1966 el Subcomité aprobó un informe suplementario sobre este tema, que se acompaña como anexo.

680. En su 470a. sesión, celebrada el 10 de octubre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité I.

⁹⁰ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7394.*

* Publicada anteriormente con la signatura A/6300/Add.3 (parte II).

Examen por el Comité Especial del informe suplementario del Subcomité I

681. En la 470a. sesión del Comité Especial, el representante de Siria, Relator del Subcomité I, presentó el informe suplementario del Subcomité.

682. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señaló que el Subcomité había confirmado todas las recomendaciones que había formulado en su informe principal sobre la cuestión (A/6000/Rev.1, cap. V, apéndice, párr. 280). Su delegación había reservado su posición sobre dicho informe cuando se estudió éste el año anterior, y lo hacía una vez más.

683. El representante de Italia recordó las opiniones expresadas por su delegación acerca del informe principal (*ibid.*, cap. V, párrs. 454 a 459). Dicho representante reservó la posición de su delegación respecto de las recomendaciones formuladas en los párrafos 89 y 90 del informe suplementario. En la inteligencia de que se harían constar estas reservas, su delegación no se opondría a la aprobación del informe.

684. El representante de los Estados Unidos de América reservó la posición de su delegación con respecto al informe por los motivos que ya había expuesto en el debate anterior sobre el tema.

685. El representante de Australia recordó que su delegación había informado al Comité Especial de que su Gobierno se había mantenido unilateralmente en contacto con el Gobierno de Portugal y que no estaba de acuerdo con la teoría del Gobierno portugués acerca de la libre determinación y otros asuntos conexos. Como su delegación ya había explicado su actitud en ocasiones anteriores, reservaba su posición respecto del informe.

686. El representante de Dinamarca señaló la posición de su delegación, ya expresada en la 31a. sesión del Subcomité (véase anexo, párr. 91), e indicó que dichas reservas seguían siendo válidas.

Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe suplementario del Subcomité I

687. En su 470a. sesión celebrada el 10 de octubre de 1966, el Comité Especial aprobó el informe suplementario del Subcomité I (véase anexo), quedando entendido que las reservas formuladas por los miembros quedarían consignadas en las actas.

688. Al hacer esto, el Comité Especial reafirmó todas las recomendaciones contenidas en el informe principal sobre este tema que había presentado a la Asamblea General en 1965 (A/6000/Rev.1, cap. V, secc. D) y decidió recomendar a la Asamblea General que incluyera en el programa de su vigésimo primer período de sesiones, como cuestión urgente e importante, el siguiente tema:

"Actividades de los intereses extranjeros económicos o de otra índole que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, Africa Sudoccidental, los territorios bajo administración portuguesa y otros territorios coloniales."

ANEXO

[A/AC.109/L.334 y Add.1]

INFORME SUPLEMENTARIO DEL SUBCOMITÉ I

Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los Territorios bajo administración portuguesa

Relator: Sr. Rafic Jouéjati (Siria)

INDICE

	<i>Párrafos</i>
INTRODUCCIÓN	1-3
EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL SUBCOMITÉ	
A. Declaraciones de los miembros del Subcomité	4-68
B. Conclusiones	69-88
C. Recomendaciones	89-90
D. Aprobación del informe	91

APENDICES

	<i>Página</i>
I. Industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique: organización y política oficial	420
II. Industrias agropecuarias y de transformación en Angola	435
III. Industrias agropecuarias y de transformación en Mozambique	460
IV. Ferrocarriles de propiedad extranjera en Angola y Mozambique	488
V. Relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur	502

INTRODUCCIÓN

1. El 3 de julio de 1964, el Comité Especial aprobó una resolución relativa a los Territorios bajo administración portuguesa (A/5800/Rev.1, cap. V, párr. 352) en cuyo párrafo 7 pidió al "Subcomité I del Comité Especial" que, con asistencia del Secretario General, examinara las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole que estaban obstaculizando la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los Territorios bajo administración portuguesa".

2. El Subcomité examinó esta cuestión por primera vez en noviembre de 1964, y luego en sesiones celebradas entre el 19 de agosto y el 12 de octubre de 1965. Tuvo ante sí dos documentos de trabajo preparados por la Secretaría, uno sobre la minería en Angola y Mozambique y otro sobre la concesión, ocupación y colonización de tierras en Angola y Mozambique (A/6000/Rev.1, cap. V, anexos I y II). Además, el Subcomité también tuvo ante sí extractos de declaraciones formuladas y de comunicaciones enviadas por peticionarios procedentes de Territorios bajo administración portuguesa durante la visita del Comité Especial a África en 1965. Sobre la base de la información disponible, el Subcomité redactó sus conclusiones y recomendaciones que posteriormente fueron aprobadas por el Comité Especial e incluidas en el capítulo V del informe que presentó a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

3. El Subcomité siguió examinando esa cuestión en sus 27a., 28a. y 31a. sesiones, celebradas el 5 y 12 de agosto y el 14 de septiembre de 1966. El Subcomité tuvo ante sí una serie de documentos de trabajo preparados por la Secretaría, en conformidad con la solicitud que figuraba en el párrafo 278 de su informe anterior (A/6000/Rev.1, cap. V, apéndice, párr. 278),

* El Subcomité está compuesto por los siguientes miembros: Dinamarca, Etiopía, Malí, República Unida de Tanzania (Presidente), Siria (Relator), Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

relativos a las industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique, a los ferrocarriles de propiedad extranjera en estos dos Territorios y a las relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Estos documentos de trabajo se publican como apéndices I a V del presente anexo.

EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL SUBCOMITÉ

A. Declaraciones de los miembros del Subcomité

4. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que Portugal era una Potencia colonial primitiva e incivilizada que se dedicaba a robar a los habitantes de Angola, de Mozambique y de la llamada Guinea Portuguesa. Era un pequeño país subdesarrollado, el más pobre de Europa, con 8 millones de habitantes; sin embargo, gracias a la ayuda de sus aliados, oprimía y empobrecía a los países africanos que, por un accidente de la historia, se hallaban bajo su administración, aplicando con tal fin métodos de que se avergonzaría cualquier otra nación. Otras Potencias coloniales — por ejemplo, el Reino Unido, Francia y, en menor escala, Bélgica — pudieron encubrir su explotación de los pueblos subyugados mediante el establecimiento de sistemas económicos que, superficialmente, parecían redundar en beneficio del pueblo. Dichas Potencias estimularon el desarrollo de una pequeña pero significativa clase media africana que les ayudaba a mantener el control de los campesinos y trabajadores africanos. Sin embargo, Portugal no había desarrollado ningún sistema económico semejante para disfrazar sus intereses, pese a la tan decantada teoría portuguesa del luso-tropicalismo, sistema encaminado a ayudar a los portugueses a fusionarse con todas las razas, culturas y religiones para formar una nación. La alegación portuguesa de haber establecido una clase de "asimilados", con suficiente cultura portuguesa como para ser indistinguibles de los colonos europeos, era un mito.

5. La política económica colonial de Portugal se centraba en los cultivos comerciales de alto precio para la exportación. La asistencia se prestaba principalmente a productores europeos o supuestamente civilizados, aun cuando los africanos eran los que se ocupaban de casi toda la producción agrícola, ya fuese como mano de obra barata o como cultivadores principales de algodón, arroz, maíz y anacardo. Los africanos interesados en ganarse la vida en la agricultura comercial estaban regidos por toda una serie de medidas legales de carácter restrictivo. Por ejemplo, todos los africanos físicamente hábiles estaban obligados a trabajar en obras públicas, a no ser que pudieran probar que se habían contratado ellos mismos como trabajadores agrícolas durante seis meses (en Angola, durante nueve meses) al año, que reunían los requisitos de campesinos autóctonos independientes o que mantenían un número mínimo de cabezas de ganado. Esas restricciones habían hecho que los africanos fuesen virtualmente esclavos de los empresarios y agricultores europeos o asiáticos, y con el sistema de concesiones a determinados monopolios para la comercialización de la producción agrícola habían eliminado todas las ventajas económicas que podrían obtenerse de la abundancia de tierras fértiles todavía accesibles al campesino africano. A los miembros físicamente menos hábiles de su familia se les dejaba cuidar de la granja durante el tiempo en que el campesino se veía obligado a trabajar en otra parte.

6. Así en Angola como en Mozambique el africano carecía de todo derecho a cualquier porción de tierra fértil, a menos que la mantuviera permanentemente despejada y cultivada. Podía ser expulsado de su tierra si se ausentaba y no la cuidaba durante más de cuatro meses al año en total, si después de tres años no mostraba que estaba aumentando el valor de sus lotes cultivados y de su ganado, o si no construía una casa de ladrillo en su lote o cerca de él en cinco años. Como los africanos pasaban la mayor parte de su tiempo en trabajos forzados y sólo estaban en libertad de cuidar su propia tierra durante la estación seca, les era imposible mantener su condición de campesinos independientes para satisfacer todas las exigencias portuguesas. Por lo tanto, la propiedad y utilización de la tierra fértil en los Territorios era un privilegio disfrutado por los europeos, los asiáticos y una porción muy pequeña de los ha-

mados africanos civilizados. Ese discriminatorio sistema agrícola tenía claramente por objeto permitir que los colonos portugueses, las industrias coloniales portuguesas y los intereses extranjeros pudiesen explotar tanto los recursos de la tierra como la mano de obra barata de los africanos. El hecho de que ninguna de las leyes que regulaban la agricultura y el trabajo en Angola y Mozambique mencionase la participación africana en las empresas comerciales era una prueba de que no se esperaba que los africanos se dedicasen a esas empresas excepto como mano de obra barata. Sólo se permitía a los africanos dedicarse al trueque dentro de la comunidad indígena o en mercados ocasionales establecidos bajo la supervisión del gobierno para vender productos primarios a intermediarios europeos o asiáticos o a compañías concesionarias.

7. La inversión en las industrias agrícolas y de elaboración en Angola y en Mozambique también favorecía a los europeos y asiáticos. En 1960, de un total de 2.423 empresas agrícolas de Mozambique, 2.246 eran portuguesas, 45 asiáticas, 34 alemanas, 26 griegas y 14 británicas. En Angola casi todos los cultivos importantes para la exportación estaban controlados por inversionistas europeos, aun cuando casi toda la producción de las explotaciones agrícolas y las plantaciones europeas la hacía el trabajador africano.

8. Una de las características más distintivas del colonialismo portugués era el sistema de compañías concesionarias. El Gobierno concedía licencias a numerosos monopolios europeos para controlar la compra, la exportación y la distribución de ciertas cosechas comerciales y de exportación que eran principalmente producidas por los africanos. Estos no tenían otra posibilidad que la de vender sus productos a los monopolios y estaban obligados a aceptar los bajos precios ofrecidos, aunque los recaudadores portugueses de impuestos esperaban en los centros de compra para cobrar los impuestos después que los campesinos habían vendido sus productos. Como resultado de ello, los campesinos regresaban a menudo a sus casas con las manos vacías.

9. La producción de café en Angola era tan lucrativa que entre 1955 y 1961 el número de cultivadores europeos de café aumentó de 600 a más de 2.000 y la región total bajo cultivo en las granjas de propiedad europea aumentó a más del doble. A causa de la intensa competencia por tierras en las zonas productoras de café, era frecuente que se expropiasen y se diesen a nuevos colonos europeos extensiones de tierras donde por muchos años habían cultivado café los africanos.

10. Las industrias de elaboración de Mozambique y Angola estaban controladas por europeos y otras personas no africanas, y en ellas se empleaba a los africanos como mano de obra barata. Los trabajadores europeos eran mucho mejor pagados que los africanos. En 1960, por ejemplo, la Colonial Cotton Development Company de Mozambique pagó un promedio de 1.460 dólares anuales a los trabajadores europeos y un promedio de sólo 87 dólares anuales a los trabajadores africanos. Aun teniendo en cuenta las diferencias de preparación técnica entre los trabajadores europeos y los africanos, tal sistema era muy discriminatorio.

11. El grueso de la producción de algodón de Mozambique había tenido que exportarse a Portugal conforme a un sistema obligatorio de cupos para los cuales los precios de exportación eran oficialmente fijados en un 60% inferior a las cotizaciones internacionales. A fin de limitar el fomento de las industrias textiles en Mozambique y en Angola, y así mantener a los Territorios como mercados firmes de los productos portugueses elaborados, el Gobierno de Portugal restringía la producción local de textiles. Si las importaciones de tejidos de Portugal fueran reemplazadas por los tejidos producidos localmente, Mozambique podría estar en situación de reducir su déficit comercial con Portugal, y de dar a su economía la capacidad de bastarse a sí misma. Sin embargo, esto sería contrario a los intereses económicos de Portugal.

12. Evidentemente, el deseo de Portugal de permanecer en Africa como Potencia colonial estaba directamente relacionado con sus intereses económicos. Cuando los pueblos africanos de Mozambique y Angola empezaron a organizarse para luchar por su independencia allá por 1960, Portugal empezó a invi-

tar a la inversión de capital extranjero. El creciente incremento de los impuestos pagados por las grandes compañías concesionarias se utilizaba claramente para comprar armas y equipo y para mantener un numeroso ejército europeo.

13. Se sabe de varias fuentes cuál era la política laboral de Portugal en sus territorios. En 1947, el Sr. Henrique Galvão, miembro de la Asamblea Nacional portuguesa y ardiente partidario de Salazar, fue enviado a inspeccionar los territorios portugueses de Africa y a su regreso redactó un informe que nunca fue publicado oficialmente, aunque con posterioridad salió a la luz en otros países. El Sr. Galvão, destituido más tarde, describía la situación del trabajador africano como peor que la esclavitud. En segundo lugar, según el artículo de un reportero americano aparecido en el *New York Herald Tribune*, del 15 de febrero de 1948, cuando el propietario de una plantación angolana necesitaba mano de obra notificaba al Gobierno, el cual pasaba el pedido a los jefes de aldea, que debían suministrar cuotas fijas de trabajadores. Si no se obtenía el número requerido, se enviaba a la policía para que lo reuniera. En tercer lugar, un experto británico en cuestiones africanas, Basil Davidson, había visitado los territorios portugueses en 1954 y en su libro *The African Awakening* (1965) describía el sistema de trabajos forzados allí practicado. Según él, los caminos rurales eran construidos y conservados por los trabajadores africanos a quienes se obligaba a hacerlo sin recibir remuneración; se practicaba el trabajo forzoso en las plantaciones europeas, y los africanos de la Provincia de Lunda, que no tenían otros medios de ganar dinero para pagar impuestos, eran obligados a trabajar para la Compañía de Diamantes de Angola.

14. La Administración portuguesa había concertado asimismo acuerdos con países extranjeros para suministrar mano de obra africana. Por ejemplo, la Convención de Mozambique de 1928 (modificada en 1934 y 1940) preveía el reclutamiento de hasta 100.000 trabajadores al año en Mozambique para las minas del Transvaal. Esto era una importante fuente de ingresos para las autoridades portuguesas, que cobraban una tasa por la expedición de pasaportes y el registro de contratos y que también recibían mensualmente 2 chelines y 9 peniques por hombre de las minas del Transvaal. Según la Convención de 1928, Sudáfrica había aceptado enviar por el puerto de Lourenço Marques el 47% del tráfico al distrito de Johannesburgo y desde él. Había un acuerdo análogo con Rhodesia del Sur que databa de 1934.

15. La capacidad de Portugal para controlar sus territorios africanos, pese a las resoluciones de las Naciones Unidas y a los levantamientos militares, se debía al apoyo que le prestaban algunas de las grandes Potencias occidentales; había que convencer a esas Potencias de que modificasen su actitud. Antes de aprobar más resoluciones, las Naciones Unidas debían aplicar sus decisiones contra Portugal y tomar medidas positivas encaminadas a prestar apoyo financiero, técnico y educacional a los habitantes de los territorios que luchaban por su independencia. Se debía alentar a los países que podían hacerlo a que diesen apoyo material directo a las fuerzas nacionalistas.

16. El objetivo que perseguía la labor del Subcomité, cualquiera que fuere la redacción de su mandato, consistía en ayudar a los pueblos africanos a que lograsen la independencia y en analizar los factores económicos que impedían que avanzasen hacia ella. Pese al diligente estudio del asunto llevado a cabo por el Subcomité en el año anterior, la Cuarta Comisión de la Asamblea General, durante el vigésimo período de sesiones, no le había prestado suficiente atención. Por lo tanto, el representante de Tanzania sugería que se pidiese a la Asamblea General que lo considerase como un tema separado del programa del vigésimo primer período de sesiones. Estaría muy interesado en oír los puntos de vista de otros miembros del Subcomité a este respecto.

17. La delegación de Tanzania reconocía que el colonialismo sería eliminado de Africa no por meras resoluciones, sino por la acción concertada de los pueblos africanos y de todos los países y pueblos del mundo amantes de la libertad. El representante de Tanzania abrigaba la esperanza de que el estudio del cual se ocupaba el Subcomité contribuyese a la derrota del colonialismo y al logro de la libertad y la paz en Africa. Todo el continente de Africa sería inevitablemente li-

bre algún día. Francia y el Reino Unido habían sido obligados a salir de África, y Portugal debía comprender que también sufriría la misma suerte.

18. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que, en cumplimiento de una decisión del Comité Especial, el Subcomité se encontraba dedicado a un estudio de las industrias agropecuarias y de transformación y del transporte ferroviario en las colonias portuguesas. Dado que la delegación de la Unión Soviética ya había formulado observaciones generales acerca de la cuestión en una etapa previa, se limitaría a los nuevos documentos de trabajo preparados por la Secretaría sobre el tema.

19. En 1965 el Subcomité y el Comité Especial habían llegado a la conclusión de que las actividades de los monopolios internacionales en las colonias portuguesas constituían el principal obstáculo para la consecución de la libertad y la independencia por parte de los pueblos coloniales y un grave impedimento para la aplicación de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General^b. Se estableció, en efecto, que Portugal había otorgado vastas concesiones a inversionistas extranjeros sin el consentimiento de los habitantes africanos. Al conceder a esos inversionistas privilegios y garantías de toda clase, Portugal había estimulado su despiadada explotación — empresa conjunta con los colonialistas portugueses — de los recursos naturales y humanos de los territorios. Los monopolios obtenían enormes beneficios y recompensaban a Portugal no sólo mediante impuestos, sino también mediante préstamos, aportes para mantener “la paz y el orden” y otros servicios. Portugal empleaba esa ayuda para sofocar la resistencia y mantener vivo el colonialismo en África. La asociación de los colonialistas portugueses con los monopolios internacionales perseguía un objetivo doble: explotar a las colonias y asegurar la continuación del sistema. Los monopolios compartían con Portugal la responsabilidad por el sufrimiento de los africanos y el incumplimiento de la citada Declaración en los Territorios.

20. También se había establecido que los monopolios que operaban en las colonias portuguesas eran originarios de los Estados de los que Portugal recibía su principal apoyo. Dichos monopolios influían sobre los gobiernos de esos países para que ayudasen a Portugal a mantener su situación colonial y, de este modo, estimulaban el incumplimiento permanente de la Carta y de las resoluciones de la Asamblea General. Asimismo, se había comprobado que los monopolios fomentaban el desarrollo de un solo sector de la economía de los Territorios. Lo que buscaban los monopolios al igual que Portugal, era la ganancia, y no la satisfacción de las necesidades del pueblo. El pueblo, en efecto, vivía en la pobreza más terrible y en una esclavitud virtual. Además, se observaba que los intereses de los monopolios y de los colonialistas portugueses estaban entrelazados con los intereses militares y estratégicos del bloque de la OTAN, que, para sus propios fines, alenataba la unión de Portugal con Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

21. Los nuevos documentos preparados por la Secretaría confirman esas comprobaciones anteriores. Bajo la política económica de Portugal, las colonias dependían completamente de la metrópoli. Se las empleaba como fuente de materias primas y mano de obra barata y como fructífero campo de inversiones para el capital internacional. Tal cual se indicaba en el párrafo 16 del documento de trabajo titulado “Industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique: organización y política oficial” (apéndice I), la propia Constitución portuguesa establecía que las colonias dependían de la metrópoli. Salazar había declarado abiertamente que las colonias estaban para “producir materias primas y venderlas al país metropolitano a cambio de bienes manufacturados” (apéndice I, párr. 17). A tales fines, Portugal había establecido una serie de normas y controles sobre la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios requeridos para satisfacer al mercado interno de Portugal u obtener

divisas, y se había prohibido a los Territorios establecer industrias que pudiesen competir con las de Portugal (apéndice I, párr. 18). Con el propósito de lograr apoyo adicional, Portugal había adoptado diversas medidas para aumentar el ingreso de capital extranjero en las colonias (apéndice I, párr. 23). Así, pues, los monopolios internacionales se tornaban cada vez más poderosos y aumentaban su dominio sobre los recursos de los Territorios.

22. En las colonias portuguesas, la barrera del color era absoluta. La legislación oficial reconocía sólo a los europeos como productores que debían registrarse en las juntas de exportación colonial, y las autoridades se preocupaban ante todo de obtener suficiente fuerza de trabajo africana para las empresas de propiedad de europeos (apéndice I, párrs. 42 y 43).

23. En el estudio relativo a las industrias agropecuarias y de transformación de Mozambique se hacía referencia a la Sena Sugar Estates, Ltd., la empresa azucarera más grande de Mozambique, el 90% de cuyas acciones estaba en manos de capital británico (apéndice III, párr. 56); en 1963, sus utilidades netas habían ascendido a 1.500.000 dólares (apéndice III, párr. 63). El documento de trabajo sobre los ferrocarriles de propiedad extranjera en Angola y Mozambique revelaba que la Trans-Zambezia Railway Company de Mozambique, empresa británica, había tenido en 1964 ingresos netos de 226.691 libras esterlinas (apéndice IV, párr. 91). De 1960 a 1963, la empresa ferroviaria Benguela Railway Company de Angola — que pertenecía casi en su totalidad a la Tanganyika Concessions Company, en la cual desempeñaba un papel principal el capital estadounidense, incluso el grupo Rockefeller — había tenido unos ingresos netos de aproximadamente 1.000 millones de escudos (apéndice IV, párr. 30); durante el mismo periodo, el Gobierno portugués había recibido unos 120 millones de escudos en virtud de su participación en las operaciones de dichos ferrocarriles (apéndice IV, párr. 32); en 1963, el Gobierno portugués había obtenido de la Compañía un préstamo de 60 millones de escudos con un tipo de interés anual del 1% (apéndice IV, párr. 34). Sus contribuciones para apoyar a la policía y la gendarmería representaban un ejemplo de la manera como un ferrocarril podía impedir que se concediese la independencia a un territorio colonial, debido a que dichas fuerzas se interesaban concretamente por la represión de los movimientos de liberación nacional.

24. En materia agropecuaria, Portugal sacrificaba los intereses y la libertad de los africanos a fin de enriquecer a los colonialistas y a los monopolios. En el documento de trabajo relativo a la organización y política oficial por que se regían las industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique, se indicaba que, hacia 1960, alrededor del 87% de las importaciones de algodón de Portugal procedían de sus colonias (apéndice I, párr. 76), lo cual ahorra una enorme cantidad de divisas, que empleaba para robustecer la industria textil metropolitana. Mediante el sistema de fijar los precios del algodón por debajo de los que regían en el mercado internacional, Portugal obtenía ventajas adicionales (apéndice I, párr. 120). La misma técnica de fijación de precios se aplicaba al café. Pero el resultado para los habitantes africanos era una vida cercana a la inanición. En los últimos años, diversos órganos de las Naciones Unidas habían reunido pruebas que demostraban las condiciones de vida excepcionalmente difíciles de la población indígena en las colonias portuguesas. El Comité Especial había reunido información más reciente durante el período de sesiones que celebró en África, y el nuevo material preparado por la Secretaría arrojaba más luz sobre la situación. El documento de trabajo mostraba que el ingreso anual medio per cápita de los cultivadores de algodón africanos era de 634 escudos, y en algunas regiones no alcanzaba a 200 escudos, o sea 7 dólares (apéndice I, párrs. 71 y 127). El material sobre cuestiones agropecuarias presentado al Subcomité permitía que se agregase una nueva conclusión a aquellas a las que el Subcomité había llegado el año anterior, con respecto al trabajo forzoso y a la transferencia de obreros “bajo contrato” a Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Una suerte horrible le estaba reservada a la gran cantidad de africanos que se dedicaban a las actividades agropecuarias. En esa esfera, una africana tenía que trabajar sin remuneración para sus amos blan-

^b Las conclusiones y recomendaciones del Subcomité figuran en el documento A/6000/Rev.1, cap. V, apéndice, párrs. 260 a 280.

cos. No existía virtualmente asistencia a las actividades agropecuarias. Se seguía una política sistemática de empobrecimiento por medio de severas medidas impositivas y de la obligación de efectuar cultivos prescritos por los cuales el cultivador no recibía casi nada. A fin de poder pagar los impuestos, los africanos a menudo tenían que trabajar para agricultores blancos, con salarios que apenas les alcanzaban para aquel fin. Es decir que, de hecho, trabajaban sin percibir remuneración. Con objeto de que no se muriesen de hambre, las autoridades les permitían que cultivasen suficiente alimento como para subsistir. La importante conclusión que cabía extraer era que las actividades agropecuarias de las colonias portuguesas se encontraban divididas en dos sectores opuestos — el europeo y el africano — y que el primero de ellos explotaba despiadadamente al segundo.

25. Otra importante nueva conclusión que surgía del material presentado al Subcomité era la de que la explotación de las colonias había ayudado a Portugal a acumular divisas, que empleaba para financiar diversas ramas de la economía metropolitana y, en particular, su industria textil, el principal sector económico. De este modo, la riqueza de las colonias, despiadadamente explotada en perjuicio de la población indígena, se empleaba para robustecer la economía de la Potencia colonial.

26. La delegación de la Unión Soviética apoyaba la opinión formulada en el Subcomité de que el Comité Especial debía recomendar a la Asamblea General que concediese especial consideración a la repercusión de las actividades de los monopolios internacionales en el África meridional y central, y tomase medidas para poner fin a esas actividades a efectos de facilitar el cumplimiento de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El representante de la URSS indicó que hacía totalmente suya la sugerencia del representante de Tanzania. También había que pedir al Comité Especial que recomendase a la Asamblea General que inscribiera estas cuestiones en su programa y las examinara con prioridad.

27. El representante de Siria observó que los efectos de las actividades de los intereses económicos extranjeros que impedían la aplicación de la Declaración en los Territorios bajo administración portuguesa había sido objeto de un prolongado estudio durante el anterior período de sesiones del Subcomité. Los documentos de trabajo recientemente preparados por la Secretaría reforzaban la opinión, expresada entonces por la mayoría, de que los intereses y los monopolios extranjeros actuaban de manera tal que impedían cualquier intento por parte de la población africana de lograr la independencia, dado que colaboraban con la Potencia colonial en la explotación de los recursos humanos y naturales africanos. Incluso mejoras aparentes tales como las viviendas permanentes para los obreros de las plantaciones o el sistema de premios representaban simplemente una excusa para una explotación más intensa de los obreros africanos; asimismo, el abandono nominal de la contratación obligatoria carecía de valor, pues esos obreros no tenían otra opción que procurar empleo en las compañías concesionarias extranjeras.

28. Un ejemplo típico de la explotación de la mano de obra africana por las empresas extranjeras lo constituía la Sena Sugar Estates de Mozambique, empresa de propiedad predominantemente británica. El costo medio total de un obrero africano para esa compañía había sido de aproximadamente 5,43 dólares de los Estados Unidos por mes en 1952, para salarios, alimentación y atención médica, lo cual probablemente era generoso en comparación con los gastos correspondientes a un obrero africano en las plantaciones de sisal y algodón. Sin embargo, en 1960 la citada Compañía registró, antes de pagar impuestos, beneficios que excedieron en mucho sus gastos totales por concepto de mano de obra africana. El beneficio para la economía portuguesa no solamente adoptaba la forma de ingresos impositivos procedentes de la Compañía, sino también la de compra de azúcar muy por debajo del precio del mercado mundial y sin pérdida alguna de moneda fuerte.

29. Se podrían dar ejemplos similares de actividades de intereses extranjeros en casi todas las esferas de la actividad económica. Sin embargo, todos ellos compartían la caracterís-

tica común de explotar los recursos humanos y naturales africanos y de asegurar un permanente aflujo de beneficios mediante el sistema de mantener a los africanos en un estado de servidumbre, impidiendo que así alcanzasen hacia la independencia. Los gobiernos que sobrellevaban una responsabilidad tan pesada y que alegaban que carecían de jurisdicción sobre las actividades de las empresas privadas no permanecerían mucho tiempo en una actitud pasiva si, en su desesperación, la población africana de los Territorios recurriera a métodos violentos.

30. La delegación de Siria apoyaba la sugerencia formulada por el representante de la República Unida de Tanzania. Había llegado el momento de que se efectuase un amplio debate en la Asamblea General y de que se brindase a todos los Estados Miembros una oportunidad de indicar su posición con respecto a la trágica explotación de los Territorios portugueses.

31. El representante de Dinamarca, refiriéndose a los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véanse los apéndices al presente anexo), dijo que su delegación dudaba de hasta qué punto se mostraba en esa documentación que hubiera en el eritorio intereses que quedaran encuadrados dentro del mandato del Subcomité. Era necesario estudiar las actividades de los intereses extranjeros que impedían el cumplimiento de la Declaración.

32. Los documentos de trabajo sobre las industrias agropecuarias y de transformación, por ejemplo, demostraban que, con una importante excepción, casi todos los intereses económicos en esos sectores eran portugueses. Pese a ello, existen ciertas inversiones extranjeras en los ferrocarriles de Angola y Mozambique, pero resultaba difícil ver de qué modo se podía decir que un ferrocarril impidiese el avance hacia la independencia.

33. Naturalmente, la delegación de Dinamarca se oponía firmemente a la explotación de cualquier pueblo por una Potencia colonial y confirmaba que, en gran medida, existía convivencia económica entre los colonialistas recalcitrantes del África meridional. Aunque su delegación no estaba convencida de que el tema encuadrase dentro del mandato del Subcomité, el representante de Dinamarca no se oponía a que en el informe del Subcomité se hiciese referencia a las relaciones económicas entre los Territorios bajo administración portuguesa y Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

34. La delegación de Dinamarca no podía aceptar la opinión del representante de la URSS de que las actividades económicas de los intereses extranjeros en los mencionados Territorios constituirían el principal obstáculo que impedía que éstos lograsen la independencia. La política aplicada por la respectiva Potencia colonial representaba un factor mucho más importante, dado que era lo que permitía la explotación e impedía los movimientos de liberación nacional, por lo cual era ésta la clase de política colonial a la que se debería poner fin.

35. La delegación de Dinamarca convenía en que existía explotación de africanos en los Territorios portugueses, y repudiaba tal hecho. Sin embargo, creía que los hechos no justificaban la conclusión de que las actividades de los intereses económicos extranjeros — como distintos de los portugueses — constituían el obstáculo principal a que se concediese la independencia a esos Territorios. En consecuencia, no podía apoyar la sugerencia formulada por el representante de la República Unida de Tanzania de que el Subcomité recomendase la inclusión en el programa de la próxima Asamblea General, como tema separado, de la cuestión que se venía discutiendo.

36. Ahora bien, si el Subcomité decidía pedir al Comité Especial que recomendase a la Asamblea General la inscripción en su programa de la cuestión de las actividades de los intereses extranjeros en los Territorios de África, sería preferible que todo esto constituyese un solo tema, lo cual facilitaría la labor de la Asamblea General y de la Cuarta Comisión, cuyo programa estaba ya muy cargado.

37. La representante de Etiopía opinó que, al abordar el estudio de las actividades de los monopolios extranjeros y de los demás intereses extranjeros en los Territorios bajo administración portuguesa como tema separado del programa, la Asamblea daría a esta cuestión el carácter de urgencia y de im-

portancia que le correspondía y pondría de relieve los factores que obstaculizaban la lucha de los pueblos africanos por la independencia.

38. A pesar de las muchas reuniones que se habían dedicado a los Territorios portugueses, de las resoluciones aprobadas y de los llamamientos dirigidos al Gobierno de Portugal por las Naciones Unidas, el Sr. Salazar seguía mostrándose sordo a todas las exhortaciones de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana (OUA).

39. La negativa de Portugal a abandonar su política anacrónica se explicaba fácilmente por las ganancias que obtenía de esos Territorios. Todos sabían que Portugal no era rico ni poderoso desde el punto de vista militar. Era innecesario preguntarse qué fuerzas lo ayudaban a continuar su lucha sin esperanzas contra las fuerzas irresistibles del nacionalismo africano. Era evidente que las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole obstaculizaban la aplicación de la resolución 1514 (XV). La política de Portugal siempre había estado inspirada por la voluntad inalterable de explotar los recursos abundantes de sus Territorios en perjuicio de la población autóctona.

40. Angola era un país muy rico, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el de la minería. Desde 1950, la agricultura estaba orientada principalmente hacia la producción de café y sisal. Las exportaciones de café, que representaban el 30% del total en 1950, habían pasado al 50% en 1964. Con una producción de 180.000 toneladas, Angola figuraba entonces en el tercer lugar entre los productores mundiales de café.

41. La producción de sisal también se había duplicado, alcanzando en 1965 la cifra de 62.000 toneladas, lo que situaba asimismo a Angola en el tercer lugar de los productores mundiales de dicha fibra. El país también era rico en diamantes, mineral de hierro, petróleo crudo, etc.

42. Mozambique también era un país rico en recursos, como se desprendería de los documentos de trabajo presentados al Subcomité, y producía para la exportación importantes cantidades de algodón, azúcar y anacardo. La mayor parte del algodón se exportaba a Portugal en aplicación del sistema obligatorio de cuotas, a precios que eran inferiores en un 60% a las cotizaciones mundiales.

43. La política de Portugal en lo relativo al régimen de la propiedad era espantosa, y, en la obra titulada *Angola and Mozambique*, Anders Ehnmark y Per Wästberg indicaban que, en los distritos en que los africanos estaban autorizados para cultivar las tierras, sólo pocas veces eran propietarios de sus campos. Aun en este caso, sus fincas podían ser confiscadas "en beneficio público", que era un concepto sumamente elástico y en muchos casos se los reducía a la condición de obreros agrícolas en sus propias tierras. Los que se marchaban eran enviados a regiones menos fértiles, inadecuadas para el cultivo.

44. Por el contrario, se otorgaban concesiones generosas a los extranjeros, tanto si se trataba de sociedades como de particulares. Mientras tanto, la situación empeoraba sin cesar. El 1° de julio de 1966, con objeto de financiar las operaciones militares y hacer frente al aumento de los sueldos de los funcionarios, el Gobierno había establecido un nuevo impuesto del 7% que gravaba a una amplia gama de productos.

45. Los principales grupos económicos que operaban en los Territorios eran la sociedad belga Petrofina, la Union Minière du Haut-Katanga, la Wankie Collier Company, compañía fundada en Rhodesia del Sur y financiada con capitales británicos, la compañía británica Tanganyika Concessions, la American Oil Company, la Standard Oil Company, la Gulf Oil Company, la Sena Sugar Estates, la sociedad Petrangol y la sociedad sudafricana Mynbu. Por supuesto, estas sociedades exportaban sus utilidades a Portugal y a los demás países occidentales, lo que hacía que la parte que quedaba disponible para el desarrollo de los Territorios y la mejora de la situación de los africanos fuese lamentablemente reducida.

46. Portugal se esforzaba por mantener el *statu quo* explotando lo más a fondo posible las riquezas de sus colonias

africanas, al propio tiempo que reforzaba su ejército para someter incondicionalmente a los nacionalistas que luchaban por la liberación. Apenas se podía negar que las sociedades extranjeras, que acataban debidamente las leyes y reglamentos de la Potencia colonial, trabajaban en contra de los intereses políticos y económicos de la población africana.

47. Por su parte, la delegación de Etiopía no veía en las inversiones extranjeras ningún factor desfavorable, sino todo lo contrario, pero no podía tolerar que las empresas financiadas con capitales extranjeros contribuyesen a perpetuar un clima político contrario a las legítimas aspiraciones de la población. A pesar de la opinión expresada por algunos países occidentales, Etiopía sostenía que esas inversiones constituían los mismos instrumentos de que se servían las Potencias colonialistas como Portugal para perpetuar su opresión. Por consiguiente, los países en los que tenían su sede esas sociedades deberían señalar a la atención de las mismas la necesidad de tener en cuenta el bienestar de las poblaciones, de conformidad con los principios de las Naciones Unidas.

48. Hacía mucho tiempo que para Portugal y sus partidarios había llegado la hora de admitir que la inmigración de europeos en los Territorios africanos y la adopción de medidas de represión contra la población autóctona no podían resolver el problema. Muy al contrario, se podrían obtener resultados fructuosos sin pérdidas de vidas humanas con el respeto por la Carta y por la opinión mundial.

49. En vista de estas consideraciones, Etiopía reafirmaba su apoyo a la propuesta formulada por la delegación de la República Unida de Tanzania, y expondría en forma más completa su opinión sobre este problema urgente y vital cuando la cuestión se plantease en la Asamblea General.

50. El representante de Túnez declaró que nunca se insistiría bastante en el papel primordial que los intereses extranjeros desempeñaban en la implantación y mantenimiento del sistema colonial, especialmente en los Territorios bajo administración portuguesa, y en el encarnizamiento con que combatían los movimientos nacionales a fin de conservar sus privilegios exorbitantes. Por lo tanto, resultaba difícil comprender que hubiese quienes se asombraran de que los países recién independizados, al propio tiempo que recurrían al capital extranjero para realizar su desarrollo económico y social, no dudasen en criticar e incluso en condenar la actividad de los monopolios extranjeros en los países que todavía sufrían el yugo colonial. En efecto, en los países recién independizados, el capital extranjero, libremente negociado y libremente aceptado, constituía un factor de progreso y prosperidad por- que su campo de acción se encuadraba en las perspectivas nacionales de desarrollo y no escapaba al control de los dirigentes nacionales. Pero en los países no autónomos los monopolios extranjeros no prestaban ninguna atención a las necesidades de los pueblos interesados y sólo buscaban las ganancias y las utilidades que les aseguraba el régimen colonial. De este modo, en vez de ser un factor de progreso para la población, el capital extranjero se convertía en un factor de explotación y servidumbre. En los territorios bajo administración portuguesa, la situación, que era tal vez más escandalosa aún que en otras partes, no escapaba a esta regla.

51. El representante de Túnez examinó la situación económica y social, así como la actividad de los monopolios extranjeros, y formuló algunas observaciones. En primer lugar, la economía de los Territorios portugueses era fundamentalmente colonial. Esos Territorios constituían un amplio mercado para los artículos manufacturados extranjeros y una fuente abundante de materias primas. De conformidad con la política definida por el Primer Ministro Salazar en 1936, "las colonias producen materias primas y las venden a la madre patria a cambio de artículos manufacturados"; esta política acarrea graves perjuicios para los autóctonos y hacía imposible todo desarrollo económico y social. En segundo lugar, la economía de los Territorios bajo administración portuguesa estaba íntimamente unida a la de Portugal y concebida fundamentalmente de acuerdo con las necesidades y los intereses de la metrópoli. Por eso el Gobierno había

prohibido a sus Territorios que creasen industrias que pudiesen competir con las de Portugal y había adoptado un sistema especial que garantizaba a la industria algodонера portuguesa el suministro de algodón en rama a precios muy inferiores a las cotizaciones mundiales. En tercer lugar, la mayoría de las sociedades interesadas en la explotación de los recursos de estos Territorios tenían su sede en el extranjero, y las ganancias se vertían necesariamente hacia el exterior. Además, había que señalar que los monopolios extranjeros mantenían en sus manos el conjunto de la economía de estos Territorios. Sólo los europeos tenían derecho a inscribirse como productores en los consejos coloniales de exportación, lo que les permitía aumentar sus privilegios, controlar todos los resortes de la administración y desempeñar un papel político primordial. Gracias a una legislación social que convertía a los africanos en una masa de braceros explotables a bajo precio, los monopolios extranjeros encontraban en estos Territorios condiciones suplementarias que les permitían multiplicar sus ganancias. En estas circunstancias, no cabía pensar en que dichos monopolios consintieran en la emancipación de los pueblos sometidos. Así, pues, el Comité Especial estaba obligado a considerar que la actividad de los intereses extranjeros en los Territorios bajo administración portuguesa era un factor que obstaculizaba seriamente la liberación de los pueblos de esos Territorios y la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV)). Había que señalar a ese respecto que los monopolios disponían de abundantes ramificaciones en Rhodesia del Sur y Sudáfrica y constituían un frente común en esta parte del continente. El fracaso de la política de sanciones económicas contra Rhodesia del Sur había revelado la potencia de esos monopolios. Por consiguiente, la delegación de Túnez apoyaba la propuesta encaminada a incluir esta cuestión como tema separado en el programa de la Asamblea General.

52. En ese sentido, Túnez estimaba que sería útil seguir el mismo procedimiento en lo referente a las actividades de los monopolios extranjeros en Rhodesia del Sur, en vista del papel que habían desempeñado en los acontecimientos recientes. Ese estudio constituiría un elemento valioso en la investigación de los medios verdaderamente eficaces para aplicar la resolución 1514 (XV) y realizar las aspiraciones de los países africanos. El representante de Túnez convenía con el de la URSS en que sería preferible inscribir la cuestión de los monopolios extranjeros en el programa de la Asamblea General como un solo tema, pero proponía que cada Territorio fuese objeto de un examen separado.

53. El representante de Yugoslavia recordó la posición del Gobierno portugués, o sea que el régimen de integración que desde hace siglos caracterizaba la política de Portugal en ultramar había producido el efecto de convertir al conjunto de los Territorios en una nación y un Estado soberanos, y que la única cuestión que se planteaba era la de si la ley confería a los ciudadanos de los Territorios los mismos derechos políticos que a los de la metrópoli, es decir derechos que les permitiesen influir en el carácter de los órganos del Estado.

54. Para aclarar cuáles eran en realidad los derechos esenciales de la población autóctona, era indispensable dar algunos ejemplos de la forma en que los recursos naturales y humanos de los Territorios (particularmente los de Angola y Mozambique) eran explotados por Portugal.

55. La economía de Mozambique, de Angola y de la llamada Guinea Portuguesa se basaba especialmente en la agricultura, que proporcionaba el 60% de las exportaciones de Angola y el 80% de las de Mozambique. Bastaba con estos datos para revelar que Portugal utilizaba sus colonias exclusivamente como fuente de materias primas y de productos complementarios para su industria.

56. A pesar de la inmensa extensión de los Territorios, la superficie cultivada sólo representaba del 2% al 3% del total, lo que claramente indicaba el lamentable estado de la situación. Los medios de producción estaban subdesarrollados,

la agricultura era primitiva y la economía sólo funcionaba gracias al empleo de mano de obra barata.

57. Si se tenía en cuenta el hecho de que los productos agrícolas formaban el 60% de las exportaciones y que en estas exportaciones el café representaba el 50% de su valor total, se advertía que el resto de los productos agrícolas sólo constituía el 10%. Por lo tanto, Angola se había convertido prácticamente en un país de monocultivo, en el que una pequeña minoría de colonos europeos obtenía todas las utilidades, mientras que la población autóctona se veía reducida a la condición de mano de obra barata. En 1964, los granjeros europeos, cuyas fincas tenían por lo general una superficie de 100 a 300 hectáreas, obtuvieron una utilidad media de 280 dólares por hectárea, o sea 28.000 dólares de beneficio en 100 hectáreas, mientras que los africanos, que por lo general no poseían sino una o dos hectáreas de tierra, sólo realizaban corrientemente una ganancia anual de 170 dólares. Todo indicaba que los recursos humanos y naturales de los Territorios estaban sometidos a una explotación sin escrúpulos y que la política portuguesa sólo era ventajosa para los extranjeros instalados en las colonias y para la economía de la metrópoli. En cuanto a los propios productores, es decir los autóctonos, el caso era muy distinto. Según los datos obtenidos en 1961, la población no africana de Mozambique poseía aproximadamente 1.700.000 hectáreas de tierra, de las cuales el 85% de las cultivables pertenecía a particulares. De un total de 2.432 explotaciones agrícolas, 2.246 pertenecían a portugueses y 177 a otros no africanos. En Mozambique, más del 93% de la población asalariada trabajaba en la agricultura y los productos agrícolas representaban el 81% del valor de las exportaciones. Por otra parte, la industria azucarera se encontraba en manos de capitalistas británicos, portugueses y sudafricanos. Convenía señalar además que las condiciones en que un africano poseía y trabajaba sus tierras eran extremadamente desfavorables. La expropiación era posible si no se cumplían ciertas condiciones, y los campesinos africanos tenían la obligación de trabajar en las tierras o en las empresas de los colonos portugueses. Les era difícil hacerse inscribir oficialmente como agricultores y no podían exportar sus productos por sí mismos, hasta el punto de que se veían obligados a recurrir a los servicios de los colonos que les compraban su producción a precio reducido.

58. A consecuencia de esta política de explotación de los Territorios como fuentes de materias primas, la industria textil portuguesa gozaba de una vigorosa expansión. En 1960 Portugal ocupaba el duodécimo lugar entre los productores europeos de hilados y tejidos de algodón, con 419 fábricas cuya producción total se valoraba en unos 4.000 millones de escudos. En 1963 Portugal obtuvo una utilidad de 1.500 millones de escudos en exportaciones de algodón, o sea aproximadamente la octava parte del total de sus exportaciones visibles. Convenía mencionar también las utilidades que los portugueses obtenían de las exportaciones de café, de anacardo y de otros productos agrícolas, y de la producción de las diferentes ramas de la economía, concretamente la industria azucarera, que se acumulaban en las cajas de las sociedades portuguesas y extranjeras.

59. Era preciso detenerse un momento para tratar de las relaciones económicas que existían entre Mozambique — es decir, Portugal —, Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

60. Las relaciones económicas con Sudáfrica se regían por la Convención de Mozambique, concertada en 1928, que contenía disposiciones relativas a la contratación de mano de obra, al comercio de tránsito y a los intercambios entre Sudáfrica y Mozambique. En 1964 esta Convención fue modificada para crear una cooperación económica más estrecha, particularmente en lo relativo a planificación e inversiones. En la Convención figuraba la cláusula de la nación más favorecida y estipulaba concesiones recíprocas aplicables a una lista de mercaderías vendidas por los exportadores, naturalmente no africanos, de Mozambique. En 1963, 150.000 naturales de Mozambique trabajaban en Sudáfrica, a cambio de salarios extremadamente reducidos. Era evidente que Sudáfrica obtenía considerables utilidades de la explotación de

esta mano de obra barata. Las autoridades portuguesas de Mozambique se beneficiaban también con la percepción de diferentes impuestos (34.600.000 escudos en 1963), y con las ganancias en divisas extranjeras (108.400.000 escudos en 1963) que les aseguraba el sistema obligatorio de pago diferido. Según lo estipulado en la Convención de Mozambique, el 50% de las importaciones de ciertas regiones de Sudáfrica pasaban por el puerto de Lourenço Marques. En 1963, el volumen total de mercancías importadas por Lourenço Marques se elevó a 600.000 toneladas, y el de las mercancías procedentes de Sudáfrica o destinadas a ésta, en tránsito por este puerto, ascendió a 3.900.000 toneladas. En este mismo año, las utilidades obtenidas por el ferrocarril ascendieron a 210 millones de escudos.

61. Como era natural, los capitales sudafricanos contribuían, en proporción importante, a las inversiones en Mozambique.

62. Relaciones análogas existían entre Mozambique y Rhodesia del Sur, tanto en lo relativo a la mano de obra como a los intercambios comerciales. Desde la aprobación de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad, los productos del petróleo procedentes de Sudáfrica venían siendo transportados a Rhodesia por el ferrocarril de Lourenço Marques. También continuaban los envíos de petróleo por los oleoductos de Beira-Umtali. Por sí solo, el comercio del puerto de Beira había alcanzado la cifra sin precedentes de 511.537 toneladas en agosto de 1965, algún tiempo antes de la declaración unilateral de independencia.

63. No era necesario mencionar concretamente quién recibía los beneficios de esta actividad. Huelga decir que no los recibía la población autóctona, que apenas ganaba el mínimo necesario para poder vivir, y que una parte de estos beneficios servía para financiar la guerra contra los movimientos de liberación y contra la población de las colonias a fin de mantener el *statu quo* y la política de explotación. Sin embargo, estas relaciones económicas entre Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur sólo constituían uno de los eslabones de la cadena de maquinaciones que tenía a mantener la supremacía del régimen racista en el África austral.

64. Las Naciones Unidas no podían hacer otra cosa que adoptar medidas para poner fin a esta situación, y debían proporcionar asistencia a los pueblos de las colonias portuguesas. Por esta razón, la delegación de Yugoslavia apoyaba la propuesta de que se hiciese figurar esta cuestión, como tema separado, en el programa de la Asamblea General.

65. El representante de Malí recordó que, después de haber estudiado los informes de la Secretaría acerca de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en los Territorios bajo administración portuguesa, y las informaciones recogidas a este respecto, el Subcomité había llegado a la conclusión de que, sin la ayuda de sus aliados occidentales y de intereses económicos extranjeros, Portugal no hubiera podido oponerse por mucho tiempo a la voluntad de las poblaciones de Angola, Mozambique y Guinea (Bissau) e impedirles ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia. Con el apoyo que representaban para el régimen de Salazar, estos intereses estimulaban a Portugal a persistir en su negativa a aplicar la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

66. Del último informe de la Secretaría se desprendía claramente que mediante la política que practicaba Portugal había reducido a sus colonias de África al papel de productoras de materias primas, con la función de alimentar las industrias de la metrópoli, de los demás países de Europa occidental y de los Estados Unidos de América. Por otra parte, Portugal había procurado restringir, mediante leyes discriminatorias, el papel que hubiera podido desempeñar la agricultura en la evolución de dichos Territorios. El artículo 1° del Estatuto del Trabajo Nacional proclamaba que la nación portuguesa constituía una unidad moral, política y económica, cuyos fines e intereses predominaban sobre los de los individuos o de los grupos que la integraban. La organización económica de los Territorios de ultramar debía

integrarse con la de la nación portuguesa y contribuir de esta forma al desarrollo de la metrópoli, que era el único que interesaba a los colonialistas portugueses. Ya en 1936, el Sr. Salazar había indicado que el papel de las colonias consistía en producir materias primas que deberían venderse a la madre patria a cambio de artículos manufacturados. En esto consistía toda la filosofía de la colonización. Una vez establecidas las estructuras, Portugal favoreció en primer lugar el desarrollo de los cultivos comerciales en perjuicio del cultivo de productos alimenticios; a continuación, estimuló a los colonos europeos a instalarse en esos Territorios concediéndoles toda clase de facilidades, mientras que se despojaba a los africanos de sus tierras, se les expulsaba de sus aldeas o incluso se les sometía al trabajo forzoso hasta la edad de 55 ó 60 años. Con objeto de reducir al mínimo los gastos de transporte de los productos de sus colonias, Portugal había creado, con ayuda de capitales británicos, sudafricanos y belgas, los ferrocarriles de Mozambique y de Angola, que únicamente servían a los centros industriales de esos Territorios y a los puertos de exportación. En el informe de la Secretaría sobre los ferrocarriles de propiedad extranjera en Angola y Mozambique se ponían claramente de manifiesto los estrechos vínculos que existían entre los intereses belgas, británicos y sudafricanos por una parte, y Portugal por la otra (apéndice IV, párr. 28). Todos esos intereses extranjeros entregaban a Portugal parte de los beneficios que obtenían gracias a la explotación de las poblaciones africanas, y Portugal los utilizaba para intensificar su esfuerzo bélico en Angola, Mozambique y Guinea (Bissau).

67. Puesto que era indudable que las actividades de los intereses extranjeros tenían por efecto frenar la evolución de los Territorios africanos administrados por Portugal hacia la libertad y la independencia, Malí apoyaría sin reservas la propuesta de Tanzania encaminada a que, en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, se inscribiese como tema separado la cuestión de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en los Territorios bajo administración portuguesa. La delegación de Malí apoyaba también la propuesta del representante de Túnez encaminada a pedir a la Asamblea General que estudiase asimismo las actividades de los intereses extranjeros en Rhodesia del Sur.

68. El Presidente puntualizó que el Subcomité había decidido pedir al Comité Especial que recomendase a la Asamblea General la inscripción en su programa, como un solo tema, de la cuestión de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, en los Territorios bajo administración portuguesa, en Rhodesia del Sur y en el África Sudoccidental, y rogó al Relator que hiciese constar en su informe esta decisión, así como la reserva formulada por el representante de Dinamarca.

B. Conclusiones

69. Estima el Subcomité que las conclusiones que sacó en 1965 — es decir, que el régimen colonial portugués y los intereses económicos extranjeros estorban la independencia de los Territorios bajo administración portuguesa — se ven confirmadas por los nuevos datos que en 1966 le han proporcionado diversos peticionarios de los Territorios y los documentos de trabajo de la Secretaría relativos a las industrias agropecuarias y de transformación, a los ferrocarriles de propiedad extranjera y a las relaciones de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

70. La situación de las industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique brinda un ejemplo clásico de los efectos de la política colonial de Portugal, que consiste en que las colonias produzcan materias primas para venderlas a la metrópoli a cambio de las manufacturas de ésta. En la aplicación de esta política se ha recurrido a una amplia reglamentación — que favorece a los europeos, a las empresas muy capitalizadas y a los monopolios — para controlar el otorgamiento de concesiones de tierras, y la producción, elaboración y comercialización de productos agrícolas que Portugal nece-

sita. Al mismo tiempo, mediante otras leyes, se han restringido para los africanos la propiedad de tierras y el ejercicio de actividades agrícolas y comerciales en pie de igualdad con los europeos, con el resultado de que los africanos sólo poseen una parte insignificante de la riqueza obtenida de los recursos naturales y de los esfuerzos de su propia mano de obra.

71. La información presentada al Subcomité demuestra que todos los cultivos comerciales importantes están controlados por intereses no africanos. En Angola, por ejemplo, la mayoría de las plantaciones de café y sisal son propiedad de colonos venidos de Portugal; y, tanto en Angola como en Mozambique, casi todo el algodón y el azúcar siguen estando controlados, en régimen de monopolio, por unas cuantas compañías importantes. La preferencia otorgada a los cultivos comerciales exportables controlados por europeos, ya sea con vistas al envío de cupos fijos a Portugal (como en el caso del algodón y el azúcar), o para obtener divisas (como en el caso del café), ha afectado gravemente a la vida económica y social de los habitantes africanos de los Territorios.

72. Aparte de la práctica del trabajo obligatorio impuesta por el Estatuto de los Indígenas y el Código del Trabajo Indígena de 1928, nada hay más revelador de la tradicional política colonial portuguesa que el régimen con que se producía y se comercializaba el algodón en Mozambique y Angola. Para suministrar a Portugal las materias primas que necesitaba una de sus industrias clave, cientos de millares de africanos se ocupaban antes en el cultivo forzoso del algodón, y se establecieron concesiones monopolistas sobre vastas regiones, con el apoyo de medidas administrativas. En 1961, por ejemplo, el número de africanos dedicados al cultivo del algodón ascendía a 520.000 en Mozambique, y a 47.000 en Angola. De las grandes compañías concesionarias algodonerías, las principales son la Companhia Geral dos Algodões de Angola, comúnmente conocida por COTONANG, que en 1960 controlaba a los dos tercios de los cultivadores de algodón de Angola, y la Companhia dos Algodões de Moçambique, con concesiones de una extensión igual a la mitad de los distritos de Zambézia y Mozambique. Fijando los precios del algodón en rama por debajo del nivel mundial, y estableciendo cupos obligatorios para el suministro de algodón a Portugal, la industria textil portuguesa pudo competir con ventaja en los mercados mundiales y monopolizar los mercados de los Territorios de Ultramar, donde las leyes limitaban la producción textil. Así, en 1960, cuando Angola y Mozambique juntas suministraban el 87% de las importaciones portuguesas de algodón en rama, Portugal, con 70.000 operarios empleados en su industria textil, figuraba en duodécimo lugar entre los productores europeos de fibra y tela de algodón, y el valor de sus exportaciones textiles representaba la octava parte del de todas las exportaciones visibles del país.

73. Sabido es lo que este régimen algodonería ha costado a la mano de obra africana. Los africanos que vivían en zonas designadas como algodonerías no tenían apenas otra elección que cultivar la extensión que se les fijara, y hay pruebas de que se coaccionó a algunos africanos para que cultivasen algodón aun en tierras no muy adecuadas, a expensas de los cultivos alimentarios y sin que cada año de trabajo les proporcionase apenas ingresos. En 1959-1960, por ejemplo, el ingreso medio anual de los cultivadores africanos en la región septentrional de Mozambique fue de 634 escudos (unos 20 dólares de los EE. UU.), y los ingresos individuales eran de 129 escudos en adelante.

74. En Angola, el hecho de que el café pasara a constituir una nueva fuente de riqueza ha sido más que cualquiera de las demás novedades registradas con posterioridad a la segunda guerra mundial, lo que ha atraído al Territorio a un número creciente de colonos portugueses. De 1950 a 1960, la población europea de Angola se duplicó con creces, pues aumentó en más de 100.000 personas; y se concedieron a colonos europeos grandes extensiones de tierras adecuadas para el cultivo del café. En 1961, unos 2.000 propietarios europeos tenían cafetales y plantaciones que en total rebasaban las 420.000 hectáreas. En cambio, el cultivo del café por los

africanos sigue sujeto a un estricto régimen de fiscalización, y aquellos a quienes se permite cultivar café sólo suelen tener entre una y dos hectáreas por familia. Se ha calculado que en 1965, de los 175.000 africanos empleados en la agricultura (más de 120.000 de ellos en cafetales), sólo 60.000 podían cultivar café por cuenta propia.

75. Gracias a medidas oficiales de apoyo financiero y técnico, el café se ha convertido en la principal cosecha de exportación de Angola; en las campañas de 1963-1964, el promedio de producción fue de 180.000 toneladas métricas, y el valor de las exportaciones de café representó casi el 50% del de todas las exportaciones visibles del Territorio. Como los Estados Unidos de América son el principal cliente (en 1964 compraron el 53% de las exportaciones de café de Angola), seguidos de los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania, el café de Angola se ha convertido en fuente importante de divisas para Portugal.

76. Tanto en Angola como en Mozambique, la producción azucarera es monopolio de unas cuantas grandes compañías. En Mozambique, la mayor de éstas es la Sena Sugar Estates Ltd., de propiedad británica, el 90% de cuyas acciones ordinarias se encuentran en el Reino Unido. En años recientes ha renacido en Mozambique el interés por la industria azucarera, que empieza a ser considerada como uno de los grandes recursos económicos del Territorio y como medio eficaz de colonizar zonas con personal portugués, inclusive militares. De las tres nuevas compañías azucareras formadas desde 1963, la de mayor porvenir viene siendo impulsada por una filial de la Anglo-American Corporation of South Africa. Otra será financiada parcialmente por la Industrial Development Corporation of South Africa. Intereses sudafricanos se han canalizado también hacia la producción del anacardo, una de las industrias más recientes del Territorio.

77. La copra, que es uno de los seis principales productos de exportación de Mozambique, está también controlada principalmente por tres compañías europeas: la Companhia do Boror, antaño de propiedad alemana predominante y hoy una de las mayores productoras de sisal; la Sociedade Agrícola do Madal, en la que predominan los intereses noruegos; y la Companhia da Zambézia, en la que el Gobierno portugués tiene interés mayoritario y las acciones restantes son propiedad de intereses sudafricanos, franceses, alemanes y británicos.

78. La información presentada al Subcomité demuestra que, mientras las exportaciones de cosechas comerciales controladas por intereses europeos han aumentado en beneficio de Portugal, de los colonizadores portugueses y de diversos intereses británicos, sudafricanos y de otras nacionalidades, se ha dejado que disminuya la producción del sector tradicional. Aunque se han gastado millones de escudos en proyectos de colonización europea, apenas se ha prestado ayuda a los cultivadores africanos. Debido a la negligencia de antaño, a los impuestos poco equitativos, y a la intervención oficial de los precios, que no brindaban incentivo, ocurre que, en Angola, por ejemplo, las exportaciones de maíz, judías, arroz y maní no han aumentado en los últimos quince años.

79. A pesar de la reciente preocupación del Gobierno por el grave descenso de la producción de cultivos alimenticios, el *Plan Intercalar de Desarrollo para 1965-1968* no contiene disposición determinada alguna con respecto a la inversión en la agricultura africana. En Angola, donde debe efectuarse una inversión total de 7.210 millones de escudos durante el trienio, en lugar de asignar fondos para mejorar la agricultura africana, la política del Gobierno consiste en fomentar la producción mejorando los precios que se pagan a los cultivadores africanos y reduciendo los impuestos y otras cargas.

80. El estudio indica que la agricultura de los Territorios bajo administración portuguesa ha sido dividida por los colonizadores en dos sectores antagónicos, el europeo y el africano, y que éste es explotado implacablemente por aquél.

81. Tanto en Angola como en Mozambique, los ferrocarriles de propiedad extranjera han servido sobre todo para abrir los Territorios a una mayor colonización europea y

para sacar de ellos valiosos recursos minerales y de otra índole. En Angola, el ferrocarril de Benguela, controlado por intereses británicos, belgas, norteamericanos y sudafricanos, siendo el único ferrocarril que funciona con ganancia, contribuye también a los ingresos del gobierno del Territorio. En Mozambique, las ganancias de los ferrocarriles constituyen una importante fuente de divisas.

82. Debido en parte a su ubicación estratégica, Mozambique sostiene relaciones estrechas y especiales tanto con Sudáfrica como con Rhodesia del Sur. Las relaciones económicas entre Mozambique y Sudáfrica fueron regidas durante muchos años por la Convención de Mozambique de 1928, en la que se disponía la contratación de trabajadores provenientes de Mozambique para las minas de oro de Sudáfrica y en virtud de la cual el Tesoro de Mozambique recibía pagos anuales en forma de derechos e impuestos y se beneficiaba de las divisas que le producía el sistema de retención de salarios. En compensación por el derecho que se le daba de contratar trabajadores, Sudáfrica garantizaba que determinado porcentaje de sus importaciones marítimas a la zona de Transvaal pasaría por Lourenço Marques. Aunque la Convención de Mozambique fue revisada en 1964, sus disposiciones básicas permanecen substancialmente iguales, si bien la zona en la que pueden contratarse trabajadores ha sido ampliada, e incluye ahora el Estado Libre de Orange, además del Transvaal.

83. Las ya estrechas relaciones de interdependencia entre Mozambique y Sudáfrica se han estrechado aún más por un perceptible movimiento de inversiones de capital sudafricano en Mozambique, del cual ya se han dado algunos ejemplos en páginas anteriores. Asimismo, el acuerdo económico celebrado entre Portugal y Sudáfrica el 13 de octubre de 1964 dispone, entre otras cosas, que se dé consideración especial a cualquier solicitud de financiación, por parte de Sudáfrica, de la construcción de carreteras, y de cualquier otra empresa que tenga particular interés para el Gobierno de Portugal, en Mozambique y Angola.

84. Tradicionalmente, Mozambique está estrechamente ligado a Rhodesia del Sur tanto por el comercio de tránsito como por constituir una fuente de mano de obra migrante. Hasta 1960, cerca del 20% de los africanos empleados en Rhodesia del Sur procedían de Mozambique, algunos bajo contrato, como los trabajadores de las minas de Transvaal. Aunque su número ha disminuido, aún hay en Rhodesia del Sur más de 100.000 trabajadores migrantes procedentes de Mozambique.

85. Según se informa en el documento de trabajo de la Secretaría relativo a las relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur (apéndice V, párrafo 46), la cooperación económica entre los dos Territorios cobró fuerte impulso con la situación política que precedió y siguió a la declaración unilateral de independencia por el régimen de Rhodesia del Sur. En virtud de un acuerdo comercial firmado entre Portugal y Rhodesia del Sur, las dos partes convinieron en concederse mutuamente el trato de "nación más favorecida" respecto de las mercaderías en las que comerciaban Rhodesia del Sur por una parte y Mozambique y Angola por la otra, y en exonerar completamente de derechos de importación a determinadas mercaderías. Otro acontecimiento importante que ha afectado a las relaciones económicas de Mozambique con Rhodesia del Sur ha sido la construcción del oleoducto Beira-Umtali con 62,5% de capital británico y 37,5% de capital portugués.

86. El estudio prueba que la explotación de los recursos naturales y humanos de los Territorios bajo administración portuguesa, la venta de mano de obra por contrato, la explotación del sector africano por el sector europeo y el suministro a Portugal, por parte de Mozambique y Angola, de materia prima barata han contribuido al aumento de las reservas de divisas que Portugal destina a financiar varios sectores de su economía, en particular la industria textil, que ocupa en ella el lugar principal. Así, con ayuda de la riqueza recibida de sus colonias y a costa de la explotación de los habitantes autóctonos de las mismas, Portugal, como otras Potencias coloniales, desarrolla su propia economía.

87. El Subcomité estima que la nueva información de que dispone confirma que los intereses económicos extranjeros apoyan directa o indirectamente la política colonial portuguesa, que se traduce en la explotación de los recursos naturales de los Territorios para provecho de esos intereses y también en el descuido del bienestar de los habitantes africanos. Mediante una relación de mutua dependencia y mutuo provecho con el colonialismo portugués, los intereses extranjeros económicos y de otra índole obstaculizan gravemente la aplicación de la Declaración en los Territorios bajo administración portuguesa.

88. Como los intereses extranjeros en Rhodesia del Sur, en el África Sudoccidental y en los Territorios bajo administración portuguesa están estrechamente relacionados entre sí, sus efectos en un Territorio tienen repercusiones en los demás. Por todo ello, el Subcomité cree necesario considerar como un solo problema las actividades de los intereses económicos y de otra índole en todos estos Territorios.

C. Recomendaciones

89. El Subcomité confirma todas las recomendaciones que figuran en su informe principal sobre las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, que obstaculizan la aplicación de la Declaración en los Territorios bajo administración portuguesa (A/6000/Rev.1, cap. V, apéndice).

90. El Subcomité estima también que el Comité Especial debe recomendar a la Asamblea General que incluya en el programa de su vigésimo primer período de sesiones, como cuestión urgente, el tema que sigue:

"Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, que obstaculizan la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, el África Sudoccidental, los Territorios bajo administración portuguesa y otros territorios coloniales."

D. Aprobación del informe

91. El presente informe fue aprobado por el Subcomité en su 31a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 1966. El representante de Dinamarca manifestó que seguían siendo válidas las reservas de su delegación al respecto, según aparecían en los párrafos 281 a 283 del informe que sobre su labor en 1965 había dirigido el Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. v, apéndice). Por otra parte, la delegación danesa no podía apoyar la recomendación contenida en el párrafo 90.

APÉNDICES

APÉNDICE I

Industrias agropecuarias y de transformación en Angola y Mozambique: organización y política oficial

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-5
PRIMERA PARTE: PRINCIPIOS Y POLÍTICA EN GENERAL	
I. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO CORPORATIVO PORTUGUÉS	6-19
A. Generalidades	6-15
B. Los Territorios de Ultramar	16-19
II. REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR	20-41
A. Generalidades	20-36
B. Cultivos practicados en virtud de concesiones especiales	37-41

	Párrafos
III. EL PAPEL DE LOS AFRICANOS EN LA AGRICULTURA	42-69
A. Generalidades	42-43
B. Restricciones legales a las actividades agropecuarias de africanos antes de 1961	44-63
C. Evolución después de 1961	64-69

SEGUNDA PARTE: EL ALGODÓN EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

I. GENERALIDADES	70-78
II. REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DEL ALGODÓN EN RAMA, 1926-1961	79-96
III. REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DEL ALGODÓN EN RAMA DESPUÉS DE 1961	97-109
IV. LOS TEJIDOS DE ALGODÓN EN ANGOLA Y MOZAMBIQUE	110-116
V. REPERCUSIONES DEL RÉGIMEN DEL ALGODÓN	117-128
A. Importancia económica para Portugal metropolitano	117-122
B. Importancia económica y social para los Territorios de Ultramar	123-128

CUADROS

	Página
1. Portugal metropolitano: Importaciones de algodón en rama	434
2. Mozambique: Precios oficiales del algodón bruto	435

INTRODUCCIÓN

1. Aunque se ha prestado mucha atención al papel de la minería en Angola y a los ingresos percibidos por Mozambique en concepto de su importante comercio de tránsito, queda en pie sin embargo el hecho de que las economías internas de ambos Territorios son esencialmente agrícolas y la abrumadora mayoría de los habitantes se ganan la vida trabajando en la agricultura y actividades conexas. No se dispone de datos que indiquen la aportación de este sector al producto interno bruto de cada Territorio, pero su importancia la evidencian las estadísticas de las exportaciones visibles. Los productos vegetales representan más del 80% del valor total de las exportaciones de Mozambique y el 60% en el caso de Angola.

2. El presente estudio reseña los principios generales y la política aplicada por Portugal con respecto a este importante sector, inclusive la política relativa a las inversiones extranjeras. Según indica el estudio, esta política ha evolucionado desde 1961. Con anterioridad a ese año, Portugal tendía a considerar los Territorios de Ultramar primordialmente como proveedores de materias primas y como mercados para los productos manufacturados de la metrópoli, destinándose todo excedente de ingresos en divisas a fortalecer la balanza de pagos de Portugal.

3. A partir de 1961, sin embargo, Portugal ha intensificado las medidas para integrar económicamente los Territorios de Ultramar y la península. Como resultado, la política oficial concede ahora mayor importancia al desarrollo económico de cada uno de los territorios (*parcelas*) dentro de lo que se denomina el reino portugués (*espaço português*) y renuncia a algunos de los controles restrictivos. De particular relieve es la suavización en 1965 de las restricciones al establecimiento de ramos industriales, inclusive especialmente los tejidos de algodón.

4. La primera parte de este estudio contiene información sobre la estructura económica del Estado corporativo, en cuanto se refiere a los Territorios de Ultramar, y la política y legislación que rigen la agricultura africana y no africana. En la segunda parte se examina más detalladamente el denominado régimen del algodón, que ilustra diversos aspectos de la política portuguesa y constituye un sector importante de las economías de ambos Territorios.

5. Este estudio se complementa con otros que describirán, por separado y con mayor detalle, las actividades agropecuarias y de transformación en cada uno de los dos Territorios (apéndices II y III).

PRIMERA PARTE: PRINCIPIOS Y POLÍTICA EN GENERAL

I. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL ESTADO CORPORATIVO PORTUGUES

A. Generalidades

6. Los principios generales que inspiran la organización económica del sistema corporativo portugués se consignan en la Constitución Política y las leyes básicas que rigen la organización corporativa del Estado, con inclusión, en particular, de la Carta del Trabajo Nacional (Decreto Ley 23.048, de 23 de septiembre de 1933)*.

7. En el artículo 29 de la Constitución Política^b se dispone que "La organización económica de la Nación deberá realizar el máximo de la producción y riqueza socialmente útil, y establecer una vida colectiva de la que resulte aumento de poder para el Estado y justicia entre los ciudadanos". Aunque se reconoce a la empresa privada como "el instrumento más fecundo de progreso y de la economía de la nación", el Estado tiene la obligación de coordinar y regular con autoridad suprema la vida económica y social, así como de formular los objetivos económicos y sociales. El Estado no podrá dedicarse al comercio ni establecer industrias, excepto, sin embargo, cuando considere que esas actividades redundarán en "beneficios sociales superiores a los que se obtendrían sin su intervención"^c.

8. El artículo 1 del Estado del Trabajo Nacional sienta el principio de que la nación portuguesa constituye una unidad moral, política y económica, y el interés de la nación prevalece sobre el de los individuos o grupos que la constituyen. Con objeto de asegurar que las actividades económicas se ejercen en armonía con el interés supremo de la nación, el Estado tiene el derecho y la obligación de establecer el equilibrio de la producción, de las profesiones, de los empleos, del capital y del trabajo, y defender la economía nacional de las explotaciones agrícolas, industriales y comerciales de índole parasitaria o incompatibles con los intereses superiores de la vida humana^d.

9. Conforme al sistema corporativo, incumbe al Estado asegurar la cooperación armoniosa de todos los elementos de la producción y promover la organización corporativa de la economía en la que cada elemento puede lograr sus propias metas legítimas así como las de la sociedad. Esta organización económica debe sin embargo, evitar conflictos de intereses (como por ejemplo entre el capital y el trabajo) y la competencia nociva (pongamos por caso entre las mismas industrias).

10. En principio, el sistema corporativo trata de asegurar lo que se ha denominado "la autonomía de cada rama de la producción"^e por conducto de la cooperación organizada de los "factores de la producción". Con arreglo a la Constitución (artículo 16), incumbe al Estado autorizar "todos los órganos corporativos, morales, culturales y económicos, y promover y auxiliar su formación". Los órganos corporativos primarios o elementales son los *grêmios*^f de productores, empleadores o

* Las otras leyes básicas son: Decreto Ley 23.049 sobre *grêmios* obligatorios; Decreto Ley 23.050 sobre sindicatos nacionales; Decreto Ley 24.715 sobre *grêmios* voluntarios; y Decreto Ley 26.757 sobre órganos de coordinación económica.

^b Las citas en este estudio de la Constitución se han traducido del texto inglés de la Constitución Política de la República Portuguesa, S. N. I., Lisboa, 1957.

^c Artículo 7 del Estatuto del Trabajo Nacional.

^d *Ibid.*, incisos 1 y 2.

^e Marcello Gaetano, en el prólogo a *Economic Planning in Corporative Portugal*, por Cotta Freppal, Londres, 1937.

^f A menudo traducidos como *cofradías*. Como estos órganos, sin embargo, no son asociaciones libres, pero sí elementos esenciales del Estado corporativo, se mantiene el término original para subrayar la distinción.

personas que trabajan por cuenta propia como agricultores y pescadores, y sindicatos de trabajadores industriales, de oficinas, y profesionales. Los *grêmios* se organizan usualmente sobre una base geográfica que corresponde a la jurisdicción de una dependencia administrativa denominada el *concelho* con subdependencias llamadas *casas* en el nivel parroquial. Los *grêmios* que representan a labradores o productores de artículos agropecuarios se denominan *Grêmios de Lavoura*. Estos *grêmios* habitualmente se refieren a todos los productos agrícolas en su jurisdicción; excepcionalmente, sin embargo, puede crearse un *grémio* para un producto o cultivo determinado. Los *grêmios* pueden establecerse voluntariamente con el permiso del gobierno⁶, o establecerse por decreto del gobierno. Una vez establecido el *grémio*, se considera que representa a todos los productores de jurisdicción aun cuando algunos de ellos no sean miembros.

11. Entre sus otras funciones, incumbe a los *grêmios* fomentar el espíritu de cooperación y solidaridad de todos los elementos de la producción, el capital, la tecnología (o dirección) y la fuerza de trabajo, para la consecución del máximo bien de la comunidad. Han de contribuir, por todos los medios a su alcance, al desarrollo económico y mejoramiento técnico de la producción agrícola, con miras a hacer progresar las condiciones económicas y sociales; han de poner en práctica los reglamentos emanados de los órganos corporativos superiores o de los órganos de coordinación económica; y prestarán servicios a sus miembros, cuando sea necesario, con inclusión de servicios para ayudarles a vender sus productos y permitirles adquirir colectivamente los bienes y maquinarias que necesiten.

12. Dentro de cada rama de la producción pueden asimismo existir asociaciones regionales de los *grêmios* y sindicatos. En el plano nacional, cada rama importante de la producción se organiza en una "corporación" que comprende a los productores (tanto el capital como el trabajo), los fabricantes o manufactureros, y los comerciantes. Un representante del Gobierno participa en la administración y en la toma de decisiones de cada una de las corporaciones.

13. Además de las "corporaciones", que se presume regulan las actividades de su sector particular de producción en interés de la nación, el Gobierno ejerce funciones de coordinación por conducto de órganos especialmente establecidos. En virtud del Decreto Ley 26.757, de 8 de julio de 1936, se preveían tres tipos de órganos de coordinación como parte de la estructura corporativa: comisiones reguladoras (*comissões reguladoras*) encargadas de fiscalizar las importaciones, los precios y la distribución de conformidad con la necesidad de la producción en Portugal y en los Territorios de Ultramar; juntas nacionales (*juntas nacionais*) encargadas de mejorar la producción y el comercio de productos nacionales con miras a estimular las exportaciones; e institutos (*institutos*) encargados de coordinar todas las actividades relacionadas con aquellos productos principalmente de exportación, que ya cuentan con sectores de producción y comercio plenamente desarrollados según la organización corporativa, pero que, debido a su importancia, requieren garantías oficiales en cuanto a la calidad y tipo de producto.

14. Los órganos corporativos que representan a factores de la producción son elementos esenciales del Estado corporativo. Participan en la elección de comisiones y concejos municipales, y, por conducto de la Cámara Corporativa, intervienen en la formulación de la política oficial. En principio, constituyen la estructura básica para la autorregulación y control de las diferentes ramas de producción. En sí, los *grêmios* difieren tanto en finalidad como en estructura de lo que generalmente se denominan asociaciones de empleadores o productores, cooperativas de productores o consumidores, o sindicatos de trabajadores, que se preocupan principalmente

del bienestar de sus propios miembros y carecen de funciones reguladoras fuera de su propio círculo. La diferencia entre un órgano corporativo tal como el *grémio* y una cooperativa de productores se acentúa más por el hecho de que, conforme a la legislación portuguesa, la sociedad cooperativa se reglamenta como una forma especial de sociedad comercial en una sección separada del Código de Comercio⁷.

15. De lo que antecede se infiere claramente que según el sistema corporativo la finalidad económica es el interés supremo de la nación, y como incumbe al gobierno interpretar y determinar este interés, el gobierno tiene el derecho de intervenir en las actividades económicas privadas, de fijar cuotas y de controlar la producción, los precios y la distribución de la riqueza.

B. Los Territorios de Ultramar

16. La relación económica de los Territorios de Ultramar con Portugal está definida en los artículos 158 a 164 de la Constitución. Estos disponen que "la organización económica de los Territorios portugueses de Ultramar deberá integrarse en la organización económica general de la nación portuguesa y coparticipar por su intermedio en la economía mundial"; el sistema económico de los Territorios "se establecerá en armonía con las necesidades de su desarrollo y el bienestar de su población, con equitativa reciprocidad entre ellos y los países vecinos, y con los derechos y ventajas legítimas de la nación portuguesa"; por otra parte, incumbe "a Portugal metropolitano asegurar, por conducto de medidas que adopten los órganos competentes, un equilibrio adecuado de los intereses... que se considerarán en su conjunto, en los sistemas económicos de los Territorios de Ultramar".

17. Aunque la organización económica general de los Territorios de Ultramar no ha seguido la estructura corporativa¹ reseñada en la sección precedente, la aplicación de los principios del Estado corporativo a los Territorios de Ultramar ha permitido en el pasado una integración de las economías de los Territorios que, en efecto, orientaron su desarrollo conforme a los intereses de Portugal. Explicando la función propia de los Territorios de Ultramar (que entonces aún se conocían como colonias) en 1936, en la reunión inaugural de la Conferencia Económica del Imperio Colonial Portugués, el Primer Ministro Salazar manifestó que era una solución lógica del problema de sobrepoblación de Portugal asentar nacionales portugueses en las colonias, así como "para las colonias producir materias primas y venderlas al país metropolitano a cambio de bienes manufacturados"².

18. Inspirado en esta política, en el período anterior a 1961, el Gobierno estableció una serie de normas y controles sobre la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios requeridos para satisfacer el mercado

⁶ Sin embargo, algunos de los *grêmios* en los Territorios de Ultramar son, de hecho, más parecidos a las cooperativas de productores. Véase la nota i *infra*.

⁷ Vicente Loff, *Estudo de base sobre o ordenamento e coordenação dos serviços e organismos executivos da política económica nacional de âmbito ultramarino*, Lisboa, 1960, pág. 11. Los únicos *grêmios* de productos agropecuarios eran: a) en Angola, un *grémio* de exportadores de maíz, un *grémio* de productores de tabaco en el Distrito de Malanje, un *grémio* de productores de frutas y hortalizas en Malanje y un *grémio* de molineros de arroz en Bié, Moxico y Lunda b) en Mozambique, un *grémio* de productores de cereales en Beira, un *grémio* de industrias elaboradoras de aceites vegetales, un *grémio* de cultivadores de té en Zambézia y un *grémio* de cultivadores de tabaco en Mozambique septentrional (págs. 14 y 15). Algunos de estos *grêmios*, sin embargo, revisten en la práctica más bien el carácter de una sociedad comercial en la forma de cooperativa de productores (tales como los productores de té y de tabaco) y con intereses primordialmente financieros (tales como el *grémio* de productores de frutas y hortalizas), págs. 68 y 69.

⁸ Los *grêmios* voluntarios pueden crearse cuando por lo menos el 50% de los productores individuales o colectivos de una rama de la producción en una determinada jurisdicción representan en conjunto cuando menos el 50% del valor medio de las transacciones en esa jurisdicción.

¹ António de Oliveira Salazar, *Doctrine and Action, International and Foreign Policy of the New Portugal 1928-1939*, traducido por Robert E. Broughton, Londres, 1939, págs. 300 a 304, citado en el documento A/AC.108/L.7, párr. 30.

interno de Portugal u obtener divisas. Se introdujo un régimen especial del algodón a fin de garantizar a la industria textil de Portugal un abastecimiento económico de algodón en rama, y se prohibió a los Territorios establecer industrias que pudieran competir con las de Portugal. Aunque estas medidas aseguraron un incremento en la producción agrícola para exportar (especialmente algodón, café, azúcar y sisal), la producción del sector de subsistencia permaneció estancada en el decenio de 1950, en parte debido a la falta de ayuda a la agricultura africana, y en parte por obra de las restricciones sobre las actividades africanas impuestas por el Estatuto de los Indígenas^a y las reglamentaciones de la fuerza de trabajo.

19. Según se informa en el capítulo V, parte I, desde que se abolió el Estatuto de los Indígenas en 1961, Portugal ha tratado de asegurar una integración política y económica más estrecha de los Territorios de Ultramar en una sola entidad, y se han introducido cambios para permitir cierta participación de los intereses locales en la vida económica y social de sus respectivos Territorios. A partir de 1965, la política oficial de Portugal es la de que el desarrollo económico de los Territorios de Ultramar ha de acelerarse para "aumentar colectivamente la riqueza del dominio de Portugal" (cap. V, párr. 33). La reglamentación de las inversiones extranjeras se ha hecho menos estricta, los servicios bancarios y crediticios se han ampliado, no se coarta ya el establecimiento de industrias de interés local, y se intensificará la colonización con habitantes de Portugal para suministrar mano de obra suplementaria. Estas medidas, una vez que se cumplan, provocarán transformaciones fundamentales en el papel de los Territorios definido por el Primer Ministro Salazar en 1936 (véase el párr. 17 *supra*). La sección que sigue reseña someramente la forma en que la política anterior y las transformaciones ulteriores se exteriorizan en las medidas oficiales para la reglamentación y control de las actividades agropecuarias en los Territorios de Ultramar. El papel de los africanos en la agricultura se describe en una sección aparte.

II. REGLAMENTACION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

A. Generalidades

Control de las inversiones extranjeras

20. Con arreglo a la Ley de Nacionalización de Capitales (Ley 1.994, de 13 de abril de 1943), por norma general la mitad del capital de toda sociedad anónima debía ser portugués. Se excluía a las inversiones extranjeras de ciertas actividades determinadas, inclusive los servicios públicos y las actividades de vital importancia para la defensa del Estado o la economía nacional¹. Con todo, esta Ley no se aplicaba a los Territorios de Ultramar, donde las normas que regían las inversiones extranjeras eran mucho más liberales.

21. No obstante, según se informó previamente en el estudio sobre la minería en Angola y Mozambique (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I), el Gobierno, de ordinario, exigía la participación de capital portugués en las compañías de propiedad de extranjeros, el registro de las compañías conforme a la ley portuguesa, y el nombramiento de nacionales portugueses en las juntas directivas. Usualmente, sin embargo, menos de la mitad del capital tenía que ser de nacionalidad portuguesa.

22. El único sector en que regía la exigencia de que el 51% del capital debía ser de propiedad portuguesa era en el uso y explotación de concesiones de tierras, pero esta disposición sólo se hizo extensiva a los Territorios de Ultramar

en Africa en 1957 (por el Decreto 36.330, de 6 de junio de 1947). En Angola y Mozambique casi todas las compañías no portuguesas con grandes explotaciones agrícolas empezaron a operar mucho antes de esta fecha, y se desconoce la proporción en que participan los portugueses. Siempre han existido disposiciones, sin embargo, en cuya virtud el Ministro de eritorios de Ultramar podía, en casos especiales, dispensar la exigencia de una mayoría de capital portugués.

23. Como ya se informa en el párrafo 58 del capítulo V, en abril de 1965 se redujeron las restricciones sobre las inversiones extranjeras y las nuevas disposiciones se aplican ahora igualmente a todo el dominio de Portugal (*espaço português*). Empresas que pertenezcan en su totalidad o en gran parte a extranjeros residentes en territorio de Portugal o a personas domiciliadas en ultramar pueden establecerse en diversos sectores con los mismos derechos que las empresas nacionales a disfrutar de las exenciones tributarias y arancelarias. Como en el pasado, el capital extranjero no puede invertir en servicios públicos, en actividades relativas al dominio público, o en actividades de importancia especial para la defensa nacional. Las compañías extranjeras no pueden adquirir derechos reales sobre la tierra en los Territorios bajo administración portuguesa excepto con la autorización del Ministro de Ultramar. La nueva reglamentación garantiza la transferencia de todo capital importado legítimamente, así como de las ganancias que resulten de dicho capital o de otras actividades. Las actividades en que siempre se autorizará la participación de capital extranjero (ya sea mediante inversión directa o merced a la compra de acciones o al otorgamiento de préstamos) incluyen, en particular, las mejoras agrícolas, la preparación de la tierra y proyectos de riego, la cría de ganado y la transformación de productos agropecuarios.

Concesiones de tierras

24. Las condiciones relativas al otorgamiento de concesiones de tierras para actividades agropecuarias y de otra índole se describen en el estudio sobre la concesión y colonización de tierras en Angola y Mozambique (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II). En general, las concesiones importantes, mayores de 5.000 hectáreas, en régimen de *aforamento*, las otorga únicamente el Ministro de Ultramar. Las concesiones más pequeñas pueden otorgarlas las autoridades territoriales, usualmente en régimen de *aforamento*, según el cual la propiedad absoluta de la tierra está subordinada a su eficaz utilización y al pago de una cantidad fija durante cierto número de años.

Establecimiento de industrias

25. Hasta 1965 la instalación de industrias en los Territorios de Ultramar se regía por el Decreto 26.509, de 11 de abril de 1936. En virtud de este decreto, la autorización para el establecimiento de industrias debía otorgarse en el orden siguiente de prioridad: a) industrias que utilizan materias primas de origen local y cuyos productos se consumen en el Territorio; b) industrias que emplean materiales de origen local cuyos productos tienen un mercado asegurado en otros Territorios portugueses o en países extranjeros; c) industrias que usan materias primas importadas y producen artículos que cuentan con un mercado local asegurado, y d) industrias que emplean materias primas y cuya producción excede de las necesidades de consumo local. El establecimiento en los Territorios de Ultramar de cualquier industria que utilice materias primas importadas tenía que ser aprobado por el Ministro de Ultramar; todos los demás casos requerían la aprobación del Gobernador General. Sin embargo, se prestaba debida consideración a las necesidades de Portugal metropolitano respecto de materias primas que no poseía (por ejemplo, algodón), y al precio competitivo de los bienes que se producirían en comparación con productos importados similares. Al parecer debido a estas consideraciones, no se establecieron fábricas de tejidos en Angola y Mozambique hasta después de 1944 (véase la segunda parte *infra*).

26. Por otra parte, el Decreto 985, de 28 de octubre de 1914, disponía que en los lugares donde se establecieran nuevas in-

^a Decreto Ley 39.666, de 20 de mayo de 1954, relativo al Estatuto de los Indígenas Portugueses de las Provincias de Guinea, Angola y Mozambique (*Estatuto dos Indígenas Portugueses das Provincias da Guiné, Angola e Moçambique*).

¹ Sólo estaba permitido a compañías "nacionales" poseer y administrar empresas en estos sectores y, a los efectos de la ley, únicamente compañías constituidas conforme a la legislación portuguesa, con sus oficinas matrices en Portugal, y la mayoría absoluta de cuyo capital era portugués, se reputaban nacionales.

dustrias o plantas que empleasen nuevos procesos productivos, el industrial podría, en ciertas condiciones, obtener un derecho exclusivo a manufacturar su producto o a emplear su procedimiento, bien dentro del Territorio, o bien en una región de éste. Tal derecho exclusivo se limitaba normalmente a un período de diez años, pero en el caso de una nueva industria que requiera fuerte inversión de capital, podía ampliarse a 20 años. Asimismo, se podía eximir al industrial durante un tiempo determinado del pago de derechos de importación sobre el equipo de capital y las materias primas no producidas en el Territorio, así como de los impuestos directos que gravaban sus operaciones industriales y tierras. Ejemplos de estas concesiones exclusivas fueron las industrias textiles en Mozambique y Angola y la industria del yute en Mozambique.

27. Según se informa en los párrafos 65 a 68 del capítulo V, muchas de las restricciones previas han sido suprimidas y en los Territorios pueden ahora establecerse libremente industrias que son principalmente de interés local, y que no afectan la economía de todo el reino portugués. En particular, los Territorios no tienen ya ninguna restricción en cuanto al establecimiento de fábricas de tejidos de algodón.

Organos de coordinación económica relacionados con las actividades agropecuarias en los Territorios de Ultramar

28. En 1937 la legislación que establecía órganos de coordinación económica dentro del sistema corporativo se extendió a los Territorios de Ultramar (Decreto 27.552, de 25 de marzo de 1937). Se autorizó al Ministro de Colonias para establecer en cada Territorio comisiones reguladoras de las importaciones, juntas de exportación e institutos para coordinar y reglamentar las actividades económicas y sociales directamente relacionadas con productos importados y exportados. Esos órganos de coordinación podían ejercer sus funciones en un solo Territorio, o en un grupo de Territorios, o en todo el territorio nacional. Cuando funcionaba en un solo Territorio, el órgano de coordinación tenía su sede en la capital del Territorio y dependía del Gobernador; en los dos otros casos, estaba situado en Lisboa y actuaba bajo la dirección del Ministro de Colonias.

29. Siguiendo la ordenación imperante en Portugal, se crearon mecanismos de coordinación para reglamentar el comercio de los Territorios de Ultramar en la forma de órganos separados que regulaban las importaciones (*comissões reguladoras de importações*) y las exportaciones (*juntas de exportações*)^m. Como estos órganos se preocupaban únicamente del comercio exterior y no tenían funciones concretas relacionadas con la producción agropecuaria, no se examinan en este estudio. Además, se establecieron órganos especiales para promover y regular las exportaciones de ciertas cosechas, que debido a su importancia para la economía nacional requerían una acción particular del gobierno. Se establecieron juntas de exportación colonial con sus sedes en Portugal para reglamentar el algodón, el café y los cereales (trigo y maíz). Estas juntas se componían enteramente de miembros nombrados por el Ministro de Colonias (más tarde Ministro de Territorios de Ultramar) con representantes del Ministerio de Agricultura y representantes de los productores (europeos) y comerciantes (importadores en Portugal), así como de exportadores de los productos de ultramar. Sus principales funciones eran: a) reglamentar las exportaciones de los Territorios registrando a los exportadores y productores europeos; estableciendo cupos de exportación y precios, y, en cada caso necesario, comprando y exportando directamente, y reglamentando los mercados internos en los Territorios; y también b) asegurar el abastecimiento de Portugal, en consulta con la autoridad metropolitana pertinente, merced al establecimiento de cupos y precios distintos para las importaciones desde los Territorios y las procedentes de otras fuentes extranjeras.

^m Según un estudio portugués de Vicente Loff (*Estudo de base sobre o ordenamento e coordenação dos serviços e organismos executivos da política económica nacional de âmbito ultramarino*, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1960, págs. 51 y 52), estos órganos formaban en efecto parte de los servicios públicos de los Territorios.

30. Debido a que la producción de algodón, café y cereales en los Territorios de Ultramar no estaba organizada corporativamente, las juntas de exportación colonial se encargaban asimismo de promover la producción gracias a la distribución de semillas seleccionadas, al suministro de ayuda financiera y técnica y de servicios a los productores en la venta de sus artículos (con inclusión del establecimiento de servicios de clasificación, almacenes y transporte), funciones que, según se describió, son, en principio, propias de los *grêmios* de productores. Sin embargo, conforme se verá más adelante, las juntas de exportación colonial del algodón y del café representaban principalmente los intereses de Portugal y no los de los Territorios que producían estas cosechas, aun cuando las juntas tenían en los Territorios sucursales por cuyo conducto prestaban algunos servicios a los cosecheros.

31. Aunque los objetivos principales de las tres juntas de exportación colonial eran análogos, la forma en que desempeñaban sus funciones variaba, por una parte, según el interés económico de Portugal en una determinada cosecha y su necesidad de ésta, y, por otra parte, según el grado de organización de los intereses afines en Portugal (importadores, distribuidores, fabricantes y manufactureros). En general, conforme aumentaba la importancia del producto para la economía interna de Portugal, eran mayores la reglamentación y control sobre su comercialización, distribución y uso. Como Portugal ha tenido siempre que importar todo el algodón en rama necesario para su industria textil, que es uno de los sectores clave de su economía, además de la Junta de Exportación del Algodón Colonial existía también una Comisión Reguladora del Comercio de Algodón en Ramaⁿ cuyas funciones eran reglamentar las importaciones, los precios y la distribución del algodón en rama a quienes lo elaboraban y manufacturaban. Según se verá en la segunda parte *infra*, la Junta de Exportación del Algodón Colonial se preocupaba, en consecuencia, sobre todo de promover la producción en los Territorios de Ultramar para satisfacer las necesidades de Portugal de algodón barato.

32. En cambio, como el café es importante para Portugal principalmente como una cosecha exportable que procura divisas y los Territorios de Ultramar no tienen dificultades en abastecer las necesidades de consumo del mercado interno de café de Portugal, y, por otra parte, no hay en Portugal industrias que dependen del café, las principales actividades de la Junta de Exportación del Café Colonial en los primeros años se concentraron en promover un aumento de la producción y en ayudar a los productores a vender su café en los mercados extranjeros.

33. La función de la Junta de Exportación Colonial de Cereales fue distinta de la de las juntas de algodón y del café porque el propio Portugal produce cereales y era necesario coordinar las importaciones y los precios de importación, especialmente de maíz, procedente de los Territorios de Ultramar, con la producción y consumo internos.

34. En 1961, a raíz de la insurrección en Angola, como parte de la política general de descentralización administrativa, se abolieron las Juntas de Exportación Colonial en Lisboa y se reemplazaron por Institutos del Algodón y de los Cereales tanto en Angola como en Mozambique y un Instituto del Café en Angola. Tal como se indicó precedentemente (párr. 13), en principio un instituto tiene la finalidad de coordinar todas las actividades relativas a productos destinados principalmente a la exportación y que cuentan con sectores de producción y comercio organizados corporativamente, pero que debido a su importancia económica requieren garantías oficiales con respecto a la calidad y al tipo. En Angola y Mozambique la producción del algodón, el café y los cereales

ⁿ Según se hizo observar, las comisiones reguladoras son órganos de coordinación y por lo tanto forman parte de la estructura corporativa básica. En Portugal, se han establecido también comisiones reguladoras para ciertos productos esenciales que tiene o ha tenido alguna vez que importar, con inclusión de la harina gruesa y el arroz.

aún no está organizada corporativamente* y los respectivos institutos son esencialmente todavía órganos oficiales (el poder ejecutivo está en manos del Director, quien es nombrado por el Ministro de Ultramar) en los que están representados los intereses de los productores y exportadores locales.

35. El establecimiento de los Institutos del Algodón, del Café y de los Cereales en Angola y Mozambique tiene por objeto permitir a los propios Territorios tener más injerencia en la reglamentación y control de la producción, distribución, precios y exportaciones de estas cosechas. En particular, se asigna mayor importancia a la función de los Institutos de ayudar al pequeño productor, especialmente prestándole ayuda financiera y técnica. Los Institutos se encargan asimismo de promover la formación de cooperativas de productores con objeto de facilitar la venta de los productos del pequeño agricultor y proporcionar una vía para efectuar inversiones en maquinaria agrícola y proyectos de regadío.

36. La actividad de la Junta de Exportación del Algodón Colonial y del nuevo Instituto se describen circunstanciadamente en la segunda parte *infra*.

B. Cultivos practicados en virtud de concesiones especiales

37. Según se mencionó, cuando un determinado cultivo es importante para la propia economía de Portugal o para satisfacer las necesidades del Territorio interesado, se suele establecer una reglamentación y control oficiales detallados sobre todos los aspectos de la comercialización, distribución y uso. Estos controles se han extendido a la fijación de precios oficiales tanto a los productores como a los exportadores y a la determinación de cupos obligatorios de suministro a Portugal y al mercado interno. En el caso de tres cultivos practicados principalmente por africanos, estas medidas han sido complementadas en el pasado con el otorgamiento de monopolios de compra a compañías concesionarias privadas. Esos monopolios se establecían sin embargo sólo respecto de los productos de africanos y no se extendían a los mismos cultivos cuando eran producidos en granjas de europeos.

38. El ejemplo más notable de la utilización de las concesiones de compra exclusiva secundadas por medidas administrativas como medio de fomentar un determinado cultivo es el llamado "régimen del algodón", que estuvo en vigor en Mozambique y Angola entre 1926 y 1961 y que se describe circunstanciadamente en la segunda parte *infra*. En virtud de este sistema, las áreas que se consideraban adecuadas para el cultivo del algodón se dividían en concesiones dentro de cada una de las cuales una sola compañía elaboradora gozaba del derecho exclusivo así como de la obligación de comprar y desmotar todo el algodón cultivado por africanos. Los concesionarios supervisaban a los cultivadores africanos y eran secundados por los funcionarios administrativos locales. Dentro del área de cada concesión, se esperaba que los africanos no ocupados en otra actividad cultivaran algodón, dependiendo la superficie que cultivaran de la edad, sexo y estado civil del individuo. En Angola, existía una legislación particular que hacía obligatorio para los africanos en determinadas zonas el cultivo del algodón. Aunque una legislación análoga no se promulgó en Mozambique, existía no obstante la obligación, derivada probablemente de las disposiciones generales relativas a la fuerza de trabajo y agricultura africanas (véanse los párrs. 45 a 48 y 54 a 57 *infra*).

39. El sistema de las concesiones de compra exclusiva se aplicó también en 1944 a las semillas de aceite de ricino (Decreto 33.925) y, en el caso de Mozambique, al arroz (Instrumento legislativo 754, de 16 de junio de 1941) con objeto de satisfacer las necesidades de consumo del Territorio. Sin embargo, como ni Mozambique ni Angola son productores importantes de semillas de aceite de ricino, que se coleccionan principalmente de plantas silvestres, no se otorgaron concesio-

nes de compra exclusiva para este fin en Mozambique y sólo una en Angola, en la zona de Bié, que se otorgó a principios del decenio de 1950 y se revocó unos 10 años más tarde debido a la insuficiente producción. Con respecto a las concesiones de arroz en Mozambique, el régimen comprendía menos africanos que el régimen del algodón, que abarcaba más de medio millón de cultivadores en ambos Territorios, y además se refería a lo que era ya un producto esencial de los cultivos de subsistencia.

40. El régimen del algodón fue objeto de severas críticas, especialmente en el extranjero, sobre todo debido a la circunstancia del cultivo forzoso y al empleo del aparato administrativo para secundar a la empresa privada, pero también en razón de que los esfuerzos para extender el cultivo del algodón condujeron a que se practicara en zonas marginales con los perjuicios consiguientes para los cultivadores, quienes en algunos casos percibieron menos de 200 escudos por año del cultivo del algodón, y la perturbación de otras actividades. Otras críticas se referían a la acumulación de concesiones en vastas zonas por unas cuantas compañías y al nivel de precios generalmente bajo.

41. En 1961, a raíz del estallido de disturbios en Angola, se declaró que el cultivo del algodón ya no era obligatorio y se adoptaron medidas para abolir las concesiones exclusivas. En ese mismo año se dictó una legislación que suprimía las concesiones exclusivas para el arroz y las semillas de aceite de ricino y, en 1963, para el algodón. Aunque este último decreto no entra plenamente en vigor hasta el 31 de agosto de 1966, parece que muchas compañías han renunciado ya a sus concesiones, algunas sin embargo con protestas. El nuevo sistema, que se describe en la segunda parte *infra*, continúa previendo un derecho exclusivo a comprar algodón en un determinado mercado que, sin embargo, se otorga anualmente en pública subasta al comerciante o compañía elaboradora que se compromete a pagar los precios más elevados.

III. EL PAPEL DE LOS AFRICANOS EN LA AGRICULTURA

A. Generalidades

42. Como resultado de la política económica de Portugal, la producción agropecuaria en los Territorios de Ultramar se ha concentrado tradicionalmente en los cultivos comerciales de precio más elevado (*culturas ricas*), con destino a la exportación, y casi todas las medidas oficiales para ayudar a la producción han sido dirigidas principalmente a los productores europeos. Según se indicó en la sección precedente, la legislación del Gobierno reconocía sólo a los europeos como productores que debían registrarse en las Juntas de Exportación Colonial, aun cuando en la práctica los africanos aportaban la mayor parte de la producción, bien desde el punto de vista de la fuerza de trabajo remuneradamente ocupada en las plantaciones, o bien como los principales cultivadores de cosechas tales como algodón y maíz, y a ellos se debía casi toda la producción de nuez de anacardo.

43. Estudios publicados por autores portugueses relativos al período anterior a 1961 indican que aparte de la distribución de semillas seleccionadas a los cultivadores africanos, quienes sin embargo tenían que reembolsarlas en especie, muy poca ayuda oficial se prestaba al sector de subsistencia, que virtualmente estaba abandonado, excepto para asegurar que los africanos produjeran artículos alimenticios suficientes para su propia sustentación. La política oficial exteriorizada en la Constitución, la Ley Orgánica de Ultramar de 1953, el Estatuto de los Indígenas y el Código del Trabajo Indígena de 1928, se preocupaba ante todo de asegurar fuerza de trabajo africana adecuada, que en Angola y Mozambique significaba principalmente fuerza de trabajo para las actividades agropecuarias de propiedad e iniciativa de los europeos.

B. Restricciones legales a las actividades agropecuarias de africanos antes de 1961

44. En Angola y Mozambique, hasta la revocación del Estatuto de los Indígenas en 1961, la función de los africanos

*La organización del sector agropecuario de la producción sobre una base corporativa está sin embargo prevista y se adoptaron medidas a este efecto en Angola, en 1963 (Instrumento legislativo 3386, de 6 de julio de 1963, en que se dispone el establecimiento de *grêmios* y *casas de lavoura*).

en la vida económica del Territorio en general, y en las actividades agropecuarias en particular, estaba sujeta a diversas restricciones legales dimanadas del Estatuto y de los conceptos en que éste se basaba.

La obligación de trabajar

45. En la sección titulada "Garantías especiales a los indígenas", la Constitución Política de Portugal enuncia los principios siguientes relativos al trabajador africano: retribución de todo trabajo ejecutado por las autoridades públicas, prohibición del trabajo obligatorio en provecho de empleadores privados, la limitación del trabajo obligatorio para fines determinados, la libertad de escoger el empleo, y el estímulo público para que los africanos mejoren su situación mediante el trabajo. El artículo 146 dispone que "el Estado únicamente puede obligar a los indígenas a trabajar en obras públicas de interés general de la colectividad, en ocupaciones cuyos resultados les pertenezcan, en la ejecución de decisiones judiciales de carácter penal o para el cumplimiento de obligaciones fiscales".

46. El artículo 32 del Estatuto de los Indígenas destacaba la actitud portuguesa tradicional en cuanto a la necesidad de que los africanos trabajen al disponer que "el Estado se esforzará en demostrar a los indígenas que el trabajo es condición indispensable del progreso, pero las autoridades no podrán hacerlo obligatorio excepto en los casos que prescribe expresamente la ley". El principio denominado de "la libertad de trabajo" fue definido en el Código del Trabajo Indígena de 1928 como sigue:

"El Gobierno de la República garantiza a los indígenas de sus colonias la libertad completa para elegir el trabajo que más les convenga, sea que lo ejecuten por propia cuenta, en sus tierras, o en las que el Gobierno les reserva a ese fin, sea que prefieran dedicarse por contrato al servicio ajeno, pero el Gobierno se reserva el derecho de estimular a los indígenas a trabajar por su propia cuenta en una medida razonable, a fin de mejorar su existencia y su condición social, y de tomar medidas de vigilancia y de benévola protección en lo que se refiere a las condiciones del trabajo bajo contrato efectuado por los indígenas."

47. Según señalan algunos escritores portugueses, aunque el Código del Trabajo de 1928 no se refería explícitamente a la obligación legal de trabajar, esto parece sin embargo haber sido admitido por la ley desde que el Estado continuó poniendo en práctica el cumplimiento de la "obligación moral de trabajar". Por otra parte, la libertad de escoger el trabajo no incluía el derecho legítimo de elegir entre trabajar o no hacerlo, porque la segunda alternativa contradecía el principio de la obligación moral de trabajar^a.

48. Como resultado del derecho del Estado a imponer trabajo obligatoriamente para fines públicos y la necesidad implícita de los africanos de trabajar, aunque en teoría los africanos podían libremente dedicarse a actividades agropecuarias por su propia elección, de hecho únicamente podían hacerlo en condiciones determinadas que se reseñan más adelante.

Condiciones en las que los africanos podían dedicarse a actividades agropecuarias

a) Trabajador agrícola

49. Las condiciones en virtud de las cuales un africano podía eximirse de la obligación de trabajar en obras públicas

^a J. M. da Silva Cunha, "A Reforma do Código de Trabalho dos Indígenas" contenido en *Questões Ultramarinas e Internacionais*, Lisboa, s. a., vol. I, pág. 74.

^b António dos Santos Labisa, "Interpenetração das economias", *Colóquios de política ultramarina internacionalmente relevante*, E. C. P. S. 1958, págs. 125 y 126; asimismo José Carlos Ney Ferreira y Vasco Soares de Veiga, *Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique*, Anotado, Lisboa, 1957, pág. 63 Nota 3A; y pág. 65 Nota 4B, que comenta la obligación moral de trabajar, haciendo ver que la libertad de trabajo no puede confundirse con la libertad para permanecer ocioso.

estaban reglamentadas por la legislación territorial en Angola y Mozambique. En ambos Territorios podía cumplir los requisitos, bien contratándose como trabajador agrícola por un determinado período, bien calificándose para trabajar como agricultor, o bien, en virtud de condiciones precisas, cultivando cierta superficie de tierra y poseyendo un número mínimo de cabezas de ganado. En Angola, de conformidad con el Reglamento del Trabajo Indígena de 1956, un trabajador no especializado tenía que estar al servicio de un empleador a lo menos durante nueve meses en el curso del año y, "los obreros especializados", que vivían cerca de las empresas y trabajaban para éstas, tenían que hacerlo por lo menos durante 180 días.

50. En Mozambique, todo indígena útil, varón, de edad comprendida entre los 18 y 55 años, deberá probar que vive de su trabajo. Este requisito podía cumplirse, entre otras formas, trabajando durante un mínimo de seis meses cada año en calidad de peón, al servicio del Estado, de un organismo administrativo o de personas privadas.

b) Agricultor africano

51. Según informó previamente la Subcomisión encargada de examinar la situación en Angola, antes de 1961, con arreglo al Estatuto de los Indígenas y a la legislación de concesión de tierras, los africanos que vivían en las zonas rurales según las formas tradicionales de vida no eran ciudadanos portugueses y no podían adquirir derechos individuales sobre la tierra en las mismas condiciones que los europeos. El artículo 35 del Estatuto de los Indígenas establecía el principio básico de la propiedad de la tierra para los africanos que vivían en sociedades tribales: se les garantizaba, en común, la utilización, conforme al derecho consuetudinario, de las tierras necesarias para el establecimiento de sus poblaciones y para el cultivo de sus frutos y el apacentamiento de su ganado.

52. Esta disposición permitía a los africanos en las zonas rurales dedicarse a la agricultura de subsistencia. En Angola, sin embargo, esta agricultura por sí sola no eximía a los varones adultos africanos de la obligación de contratarse en obras públicas, y en Mozambique no era aceptada como prueba adecuada que se vivía "de su trabajo" (véanse los párrafos 47 y 48 *supra*). En ambos Territorios, por lo tanto, los hombres útiles generalmente estaban ausentes de sus aldeas de 180 a 270 días por año, prestando servicios por contrata, y durante este tiempo otros miembros cultivaban la parcela de la familia.

53. Un africano podía dedicarse exclusivamente a la agricultura sólo si reunía los requisitos para registrarse como agricultor por derecho propio, o si formaba parte de un plan de colonización o producción oficiales.

54. En Angola, conforme a una orden (la No. 88) de 30 de abril de 1927, los derechos a la tierra de un indígena africano se reconocían únicamente si i) la tierra había sido labrada para cultivos permanentes; ii) la tierra se mantenía permanentemente desbrozada y el poseedor del título continuaba el cultivo y recolectaba todos los frutos de la tierra; y iii) el propietario transformaba progresivamente la recolección espontánea en cultivos sistemáticos plantando con el espaciamiento adecuado. La superficie sobre la cual un africano podía obtener un título en virtud de este reglamento se limitaba siempre a la efectivamente cultivada por el titular y su familia (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párr. 44).

55. Una vez que un africano había obtenido autorización para cultivar una parcela como tenedor individual, podía tenerla únicamente si reunía las distintas condiciones estipuladas por el Departamento de Agricultura. En Angola, conforme al Reglamento del Trabajo Indígena de 1956, para figurar como agricultor africano había que:

a) Mantener su residencia permanente durante más de tres años en una vivienda mejorada en la tierra que cultivase, junto a ésta o en una aldea cercana;

^a Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Suplemento No. 16 (A/4978), párrs. 319 a 342.

b) Cultivar la superficie mínima que le prescribiesen los servicios de agricultura;

c) Mantener en buenas condiciones durante más de tres años las plantas perennes que se le hubiese indicado cultivar;

d) Mantener ganado, en lo posible, de cría y labor, cuidándolo como lo prescribiesen los servicios de veterinaria;

e) Proteger el suelo contra la erosión y seguir las demás instrucciones técnicas esenciales relativas al cultivo, preparación y presentación de los productos*.

56. En Mozambique, por otra parte, para registrarse como agricultor africano conforme al artículo 42 del Estatuto de 1944 (Instrumento legislativo 919), un africano debía:

a) Cultivar permanentemente una o más parcelas que debían conformarse a las exigencias del cultivo de la tierra;

b) Ser el trabajador principal y permanente de las diversas actividades relacionadas con su explotación, en las que podía contar con la ayuda de sus parientes y empleados remunerados o intercambiar servicios con otros trabajadores;

c) Residir con su familia en una de sus parcelas o en las inmediaciones;

d) Haber pagado todos los impuestos;

e) Desplegar sus actividades conforme a las instrucciones del Gobernador General.

57. Podía ser desalojado si, entre otras cosas, a) se ausentaba y no cuidaba sus parcelas durante más de un total de cuatro meses en un año; o b) después de tres años no acreditaba que "lograba el desarrollo agrícola inherente al incremento y mayor valor de sus superficies cultivadas y ganado"; o c) no construía, dentro de cinco años, una casa de albañilería en sus parcelas o cerca de éstas.

c) Varios

58. Según ya se mencionó, los africanos podían asimismo dedicarse exclusivamente a las actividades agropecuarias si formaban parte de un plan de colonización agrícola o de producción oficial. Una descripción de los planes de colonización para africanos implantados antes de 1961 figura en el estudio sobre concesión, ocupación y colonización de tierras en Angola y Mozambique (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II).

59. Entre los planes especiales de producción agropecuaria, el más importante era el régimen del algodón, que se describirá con más detalle en la segunda parte *infra*.

Transformación y comercialización de los productos agropecuarios

60. El Estatuto de los Indígenas nada dice de la propiedad y funcionamiento de empresas comerciales de africanos que tengan la condición de indígena. Los reglamentos sobre industrias domésticas independientes y la demás legislación relativa a industrias de elaboración y transformación se aplicaban únicamente a ciudadanos portugueses y africanos que habían optado por someterse al derecho civil portugués. Sin embargo, cabe presumir que los africanos que vivían en sociedades tradicionales podían elaborar productos agropecuarios para su propio uso. No obstante, la comercialización de productos agropecuarios, cualquiera que fuese su modalidad, estaba sujeta a restricciones.

61. El artículo 49 del Estatuto de los Indígenas disponía que "la venta a personas no indígenas de productos agrícolas cultivados por personas indígenas puede estar sujeta a determinadas condiciones por las autoridades administrativas que también la pueden limitar o prohibir" en los casos siguientes:

"1. Cuando la venta de esos productos pueda tener como consecuencia una escasez de alimentos en la localidad;

* *Ibid.*, pág. 28, nota 60. Según un Decreto del Gobernador General, un africano que cultivaba más de una hectárea de café o 3.000 plantas tenía asimismo derecho a recibir el certificado de agricultor africano denominado *título*.

"2. Cuando el producto ofrecido sea muy inferior al que normalmente se vende en el mercado, por haberse recogido antes de tiempo, por una preparación deficiente, un mal estado de conservación o cualquier otra circunstancia análoga;

"3. Siempre que se requiera alguna medida de esa índole a fin de cumplir la ley por la que se dispone un régimen especial de compra en beneficio directo del cultivador o para mejorar la producción o fomentar el interés de la economía en general."

62. El mismo artículo disponía asimismo que:

"Cuando lo aconsejen las circunstancias, sólo se autorizará la venta a personas no indígenas de productos cultivados por personas indígenas en ferias periódicas o en mercados vigilados por las autoridades y con precios regulados por ellas para proteger los intereses de los cultivadores." (Citado en el documento A/AC.108/L.6, párr. 100.)

63. La ley permitía el libre comercio entre africanos, pero mientras que en ciertas condiciones podían vender sus productos a intermediarios europeos, no podían exportar algodón, café o maíz, pues no se reconocía a los africanos como "productores" de estos cultivos a los efectos del registro en las Juntas de Exportación Colonial. Parece que por regla general la fijación de precios oficiales no afectaba a los productores africanos, excepto aquellas cosechas (tales como el algodón y, en el caso de Mozambique, el arroz) para las cuales regía un régimen especial de adquisición o las cosechas que se vendían en mercados periódicos organizados bajo la supervisión del gobierno.

C. Evolución después de 1961

64. Desde la abolición del Estatuto de los Indígenas en 1961 se han introducido diversos otros cambios que influyen, o pueden influir progresivamente, en el papel de los africanos en la agricultura de Angola y Mozambique. Entre las medidas más importantes figuran a) el nuevo Código del Trabajo Rural de 1962; b) las medidas adoptadas para la integración más estrecha de los Territorios y Portugal; c) los cambios en los derechos de los africanos sobre la tierra, el aumento de la colonización europea, y los nuevos planes de reorganización rural que se describen en el estudio sobre la concesión, ocupación y colonización de tierras en Angola y Mozambique (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II); y d) la revisión del régimen del algodón, que se explica en la segunda parte *infra*.

65. Cabe señalar, sin embargo, que como han indicado estudios e informes anteriores, muchas de las nuevas leyes introducen cambios que son más aparentes que reales.

66. El Código del Trabajo Rural de 1962¹, por ejemplo, se aplica a "todos los trabajadores, sean cuales fueren los grupos étnicos o culturales a que pertenecen". Pero dado que la expresión "trabajador rural" se define en el Código como "todo trabajador manual sin oficio definido ocupado en actividades ligadas a la explotación agrícola de la tierra y recolección de los productos, o destinadas a hacer posible o asegurar aquella explotación", en efecto, debido a que hay muy pocos europeos en esta categoría, principalmente son africanos los afectados por su aplicación, sobre todo porque el Código dispone asimismo en el artículo 150 que "constituye deber del Estado asegurar una evolución socialmente equilibrada de las economías de subsistencia y de mercado". Por otra parte, aunque el Código del Trabajo Rural no hace referencia a la obligación de trabajar, no ha cambiado la actitud del Gobierno de que todos los ciudadanos deben ganarse la vida por sus propios esfuerzos y que deben reprimirse la vagancia y el ocio.

67. Análogamente, la legislación de concesión de tierras mantiene disposiciones previamente contenidas en el Estatuto de los Indígenas y, según se informó en el estudio sobre concesión, ocupación y colonización de tierras en Angola y

¹ Decreto 44.309, de 27 de abril de 1962; se cita el texto español que aparece en: OIT, Serie Legislativa, 1962, Por. 1.

Mozambique (*ibid.*, párrs. 47 a 57), continúa distinguiendo entre derechos sobre la tierra de africanos que han optado por regirse por el derecho civil portugués y de los que viven en sociedades tradicionales.

68. Así, pues, es evidente que la posibilidad de que las medidas implantadas desde 1961 provoquen algún cambio en el papel de los africanos en la agricultura de Angola y Mozambique dependerá en gran medida de cómo se interpreten o apliquen las leyes.

69. Las medidas oficiales recientes para ayudar a la agricultura africana en estos Territorios incluyen el suministro de servicios crediticios, almacenamiento y transporte agrícolas, y el establecimiento de un sistema de mercados rurales ordinarios supervisados. Esta evolución se describirá en estudios separados sobre el papel de la agricultura en Angola y Mozambique, que indicarán la estructura de la producción, elaboración y comercialización de las principales cosechas, inclusive la información disponible sobre las inversiones de capital en estas actividades, la reglamentación y controles oficiales, y la importancia económica de cada cosecha para el territorio y sus habitantes.

SEGUNDA PARTES EL ALGODÓN EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

I. GENERALIDADES

70. Aparte de la práctica del trabajo obligatorio en virtud del Estatuto de los Indígenas, nada ejemplificaba mejor la política portuguesa hacia los Territorios de Ultramar y sus habitantes indígenas con anterioridad a 1961 o era más generalmente criticado en el exterior que el régimen con arreglo al cual se producía y comercializaba el algodón en Mozambique y Angola. Introducido concretamente para desarrollar dentro del plazo más breve posible una oferta segura de materias primas a una de las industrias capitales de Portugal, entrañaba el cultivo obligatorio del algodón por cientos de miles de africanos, la aplicación de reglamentos y controles oficiales detallados y el establecimiento de concesiones monopolísticas sobre extensas zonas.

71. En 1961, cuando el cultivo de algodón por africanos dejó de ser obligatorio, había 520.000 cultivadores de algodón africanos registrados en Mozambique y casi 47.000 en Angola, que percibían un ingreso medio por habitante de su producción que resultaba inferior a 1.000 escudos por año y en algunas regiones no alcanzaba a 200 escudos*.

72. El desarrollo de la producción algodonera en los dos Territorios se llevó a cabo dentro del período de 35 años iniciado en 1926. Aunque el algodón se cosechaba hacia tiempo como un cultivo africano y hubo intentos esporádicos para explotarlo comercialmente, sobre todo en Angola, durante los siglos XIX y comienzos del XX, la desorganización de la oferta mundial en el curso de la primera guerra mundial sirvió de impulso inicial poderoso para organizar la producción. En Mozambique, particularmente, los inversores europeos explotaron el algodón como cultivo de plantación. El estímulo fue, sin embargo, de breve duración; después de la guerra, la normalización de los mercados mundiales y los elevados costos inherentes a la necesidad de concentrar fuerza de trabajo en las plantaciones, indujeron a los agricultores europeos a abandonar el algodón por formas más rentables de inversión.

73. Según se explicó en la primera parte *supra*, Portugal, antes de 1961, consideraba a los Territorios de Ultramar primordialmente como productores de materias primas para la metrópoli. En el caso del algodón, sin embargo, la industria de tejidos de Portugal se había abastecido tradicionalmente en los Estados Unidos y el Brasil. En consecuencia, salvo el breve interludio durante la guerra, no hubo hasta mediados de los años 20 un esfuerzo sistemático por parte del Gobierno para incrementar la producción de algodón en los

Territorios de Ultramar. Con la nueva situación económica mundial suscitada después de la guerra, esta fuerte dependencia de fuentes extranjeras de abastecimiento, junto con el volumen creciente de importaciones de algodón y el aumento de los precios mundiales, complicaron notablemente las dificultades de la balanza de pagos de Portugal. En 1925 se estimó oficialmente que las necesidades anuales de Portugal de algodón en rama eran aproximadamente de 17.000 toneladas, de las cuales sólo 800 toneladas procedían de Mozambique y Angola. La necesidad de adquirir casi todo su algodón en fuentes situadas fuera de la zona del escudo representaba para Portugal una salida anual de divisas en la región de 150 millones de escudos.

74. A fin de eliminar esta sangría de divisas y teniendo en cuenta la experiencia en otros territorios coloniales donde el algodón se había establecido satisfactoriamente como un cultivo del campesino africano, el Gobierno de Portugal en 1926 instituyó un régimen de cultivo obligatorio en Mozambique y Angola con el propósito declarado de lograr con la mayor brevedad la autarquía de la zona del escudo en materia de abastecimiento de algodón. Las características fundamentales del régimen eran, por una parte, el otorgamiento de monopolios de compra a compañías concesionarias que, a cambio de sus derechos exclusivos, se encargaban de promover el cultivo de algodón por africanos en sus concesiones y de adquirir y elaborar todo el algodón así producido, y, por otra parte, el establecimiento de una reglamentación y control gubernamentales detallados sobre todas las actividades relacionadas con la producción, elaboración y colocación del algodón, inclusive la fijación de precios tanto a los exportadores como a los cultivadores.

75. En general, los principios que inspiraban a la legislación algodonera en los Territorios de Ultramar de 1926 a 1961 ilustran la política económica portuguesa en esa época. Como el algodón era una materia prima esencial de una importante industria de exportación metropolitana, pasó a ser un cultivo obligatorio para los africanos que vivían en las zonas designadas como productoras de algodón, y los funcionarios administrativos locales estaban obligados a cooperar con los concesionarios en la tarea de inducir a los africanos a producirlo. Al mismo tiempo, por conducto de precios controlados y cupos obligatorios para el suministro de algodón a Portugal, así como limitando la producción de tejidos en los Territorios de Ultramar, la política portuguesa tendía a garantizar un suministro de algodón a la industria metropolitana a precios que le permitieran competir ventajosamente en los mercados mundiales, y a reservar casi todo el mercado de los Territorios de Ultramar para los productos textiles portugueses.

76. Aunque el régimen logró su principal objetivo, esto es, que por 1960 alrededor del 87% de las importaciones de algodón en rama de Portugal procedían de los Territorios de Ultramar, fue objeto de muchas críticas, especialmente fuera de Portugal. Entre los motivos de esta crítica figuraban las presiones ejercidas sobre africanos para que cultivaran algodón, el uso del aparato administrativo local para secundar a industriales privados, la situación privilegiada de los concesionarios de algodón, varios de los cuales adquirieron derechos exclusivos sobre regiones enormes, y el suministro obligatorio de algodón en virtud de cupos a Portugal a precios inferiores a los que prevalecían en los mercados mundiales. Cabe advertir que después de 1956 la ventaja respecto del precio para Portugal disminuyó debido a un aumento de la oferta mundial de algodón y al subsidio de las exportaciones de algodón por parte de los Estados Unidos.

77. De 1961 a 1965, Portugal revisó completamente la legislación que regía al algodón en los Territorios de Ultramar en virtud de una serie de decretos. Estos reemplazaron el régimen precedente por uno más liberal en que el cultivo del algodón por africanos ya no es obligatorio, las concesiones quedan abolidas y la exportación de algodón en definitiva se eximirá de restricciones de cuotas y controles de precios. El nuevo régimen exterioriza la nueva política de Portugal hacia el desarrollo económico de los Territorios de Ultramar,

* Un escudo equivale a 3,5 centavos de dólar; el dólar de los EE. UU. equivale a 28,5 escudos.

que es inherente al movimiento hacia la integración de la zona del escudo; y también la paulatina mitigación de las restricciones sobre las inversiones de capital y el establecimiento de ciertas industrias, inclusive textiles, en los Territorios. El nuevo régimen, aunque de transición por cuanto mantiene el sistema de cupos obligatorios para el suministro de algodón en rama a Portugal así como otros controles por un nuevo período de cinco años, abre la vía hacia la mayor industrialización del algodón en los Territorios de Ultramar y su acceso oportunamente sobre una base competitiva a los mercados mundiales de productos de algodón.

78. Las secciones que siguen describen la evolución del régimen del algodón y sus consecuencias tanto para los Territorios interesados como para Portugal.

II. REGLAMENTACION Y CONTROL DEL ALGODÓN EN RAMA, 1926-1961

79. A partir de 1926 se dictaron varios decretos e instrumentos legislativos que regulaban la producción, el comercio y la elaboración del algodón cultivado por africanos en los Territorios de Ultramar. Con objeto de promover el establecimiento de plantas despepitadoras y transformadoras de algodón, el Decreto 11.994 (28 de julio de 1926) restringió todas las compras de algodón cultivado por africanos a compradores autorizados (europeos y *asimilados*) que, para obtener una licencia, debían poseer equipo y medios de almacenamiento suficientes para elaborar la cantidad de algodón que se les autorizaba a comprar. Cuando las plantas despepitadoras y elaboradoras reunían exigencias determinadas de capacidad y eficiencia, se denominaban "fábricas de algodón" y para cada fábrica el titular de la licencia obtenía el derecho exclusivo a comprar todo el algodón cultivado por africanos dentro de una zona de concesionario que no excediera de 50 kilómetros cuadrados, límite aumentado en 1932 (Decreto 20.881, de 13 de febrero) a 120 kilómetros cuadrados. No había restricciones acerca del número de fábricas y zonas de concesionario explotadas por una compañía, y en Angola y Mozambique algunas grandes compañías adquirieron varias concesiones (véanse los estudios separados sobre Angola y Mozambique). Como un incentivo suplementario, se eximía a los tenedores de licencias del pago de derechos de importación por concepto de su equipo y suministros, así como de todos los impuestos, salvo uno estadístico nominal (0,01% *ad valorem*), sobre el algodón que entraba a Portugal, y se les cobraba tarifas mínimas de transporte ferroviario y embarque en los Territorios.

80. Con objeto de abastecer a estas fábricas de despepitado, se prohibía a los africanos vender su algodón excepto a compradores con licencia y en los mercados supervisados. En las zonas de concesionario podían vender únicamente a la fábrica del concesionario o a sus agentes. Con arreglo al artículo 19 del Decreto 11.994, los precios que debían pagarse por el algodón de africanos en cada región los fijaba anualmente el Gobernador del Territorio interesado "teniendo en cuenta las condiciones de la fuerza de trabajo", así como el transporte y otros gravámenes "de modo que el algodón se vendiera en mercados europeos a precios no superiores a los del algodón producido en las colonias vecinas".

81. El éxito del régimen dependía primordialmente de que se indujera a los africanos a cultivar algodón. El Decreto 11.994 disponía (artículo 13) la acción concertada de parte de las autoridades territoriales, con inclusión de los administradores y jefes locales en las regiones productoras de algodón, para promover el cultivo de esta cosecha entre africanos por conducto de la propaganda, la distribución de semillas, la asistencia técnica y la supervisión, así como "por todos los demás medios que se estimaran apropiados". En las zonas de concesionario esta labor le incumbía a los agentes de las fábricas, que ostentaban investidura oficial, con la colaboración de las administraciones locales. De hecho, como las principales zonas de cultivo de algodón pronto fueron objeto de concesión, los agentes de las compañías concesionarias, incluso técnicos y promotores (*propagandistas*), cum-

plían la función principal de determinar las tierras que deberían destinarse al cultivo del algodón y cómo deberían explotarse, correspondiendo a los administradores locales y jefes locales la tarea de supervisar a los cultivadores en la ejecución de las diversas fases de las campañas anuales del algodón establecidas por los concesionarios, observar el cumplimiento de los reglamentos y asegurar que los precios oficiales se pagaran a los cultivadores, inspeccionar la comercialización del algodón, oír las quejas y llevar a cabo todas las demás obligaciones conexas, tales como velar por que se construyeran y mantuvieran con mano de obra local los caminos de servicio.

82. Según se infiere de lo anterior, el objeto del régimen era fomentar el cultivo del algodón como la principal actividad africana en ciertas regiones merced a los esfuerzos de empresarios comerciales secundados y apoyados por las administraciones territoriales. Sin embargo, debido en parte a los efectos de la depresión económica mundial y al consiguiente descenso de los precios del algodón, el nuevo régimen no produjo el incremento esperado de la producción y, tras una breve alza inicial, la oferta de algodón a la industria textil de Portugal descendió nuevamente hasta el punto de que en 1931 había retornado casi al mismo nivel de 1925. Ante esta situación, se adoptaron nuevas medidas para estimular un incremento de la producción. Así, en 1932, el Decreto 21.226 (10 de mayo de 1932) instituyó una prima de importación pagadera a los exportadores de todo algodón colonial embarcado a Portugal en buques portugueses. El Decreto prohibía asimismo (artículo 14) la contratación de africanos en las zonas de concesionarios de algodón para que trabajaran fuera de esas zonas, prohibición que más tarde se reiteró en el Decreto 35.844 (31 de agosto de 1946). Ambos decretos exigían a las autoridades administrativas en las regiones de cultivo de algodón que "desplegaran esfuerzos persistentes" con objeto de lograr el máximo desarrollo del cultivo de algodón. Aunque la legislación metropolitana no mencionaba expresamente la compulsión*, disposiciones locales en Angola compellan de hecho a los africanos en determinadas zonas a que cultivaran algodón en virtud de normas que establecían las superficies mínimas que debían cultivarse según la edad, el sexo y el estado civil del individuo, supervisando la observancia de estas reglas los agentes de los titulares de concesiones, quienes comunicarían todo incumplimiento a las autoridades administrativas para que adoptasen las medidas pertinentes". En Mozambique, no se promulgó una legislación semejante, pero el cultivo de algodón era sin embargo obligatorio en las zonas de concesionarios debido a que a) los africanos tenían la obligación de trabajar y de pagar impuestos, y b) la tierra estaba oficialmente reservada para el cultivo del algodón.

83. Una tercera medida, introducida en 1932 (Decretos 20.935 y 21.226) fue la creación de un fondo que se utilizaría para mejorar la producción africana. Los ingresos de este fondo dimanaban de un impuesto adicional de 15% sobre todo el hilo y tejidos de algodón importados por Mozambique y Angola desde países distintos de Portugal.

84. Entre 1932 y 1937 las expediciones de algodón a Portugal desde Mozambique y Angola casi se sextuplicaron, representando en el último año el 36,6% del algodón que

* La única referencia a ésta figura en el artículo 6 b) del Decreto 4.405 (4 de noviembre de 1955) que dice así: "La mejora de los métodos de producción continúa siendo una obligación fundamental de todas las entidades interesadas en el cultivo, autorizándose ahora la formulación de programas obligatorios".

* Angola, *Instrumentos Legislativos* 638, de 24 de septiembre de 1927; 5, de 6 de septiembre de 1928; 242, de 13 de enero de 1930; y Orden 6.619, de 5 de enero de 1949. En virtud de la Orden últimamente mencionada, los africanos se dividían en agricultores del algodón (esto es, hombres útiles de 18 a 55 años de edad) y cultivadores del algodón (hombres de 56 a 60 años de edad, solteronas, viudas y mujeres divorciadas). Según su clasificación, se exigía a los africanos que cultivaran de 0,25 a una hectárea conforme a las instrucciones de los agentes del titular de la concesión.

importó Portugal, aun cuando la cantidad importada casi se había duplicado en el período correspondiente. Habiendo alcanzado ahora la producción y el comercio ingentes proporciones se adoptaron medidas para completar la organización económica de la industria estableciendo órganos reguladores de conformidad con los principios generales del Estado corporativo (véase la primera parte, *supra*).

85. El primer órgano que se estableció (por Decreto 27.702 de 15 de mayo de 1937) fue la Comisión Reguladora del Comercio de Algodón en Rama (*Comissão Reguladora do Comércio de Algodão em Rama*) cuya función era controlar las importaciones de algodón de Portugal y asegurar que todo algodón de los Territorios de Ultramar se comercializara, de ser necesario, mediante distribución obligatoria a los importadores sobre una base de cupo* y a los precios fijados por la Comisión. Tal como se constituyó en 1937, la Comisión se componía de un presidente y un vicepresidente designados por el Ministro de Comercio e Industria, y de tres miembros, un representante de los importadores de algodón, un representante de la industria textil de algodón y, desde 1938, un representante de la Junta de Exportación del Algodón (véase *infra*). Los ingresos de la Comisión provenían de un impuesto de 7 centavos por kilogramo de algodón importado por Portugal desde los Territorios de Ultramar y 10 centavos por kilogramo importado desde otros países extranjeros. En virtud del Decreto Ley 28.699 de 1938, la Comisión, de común acuerdo con la Junta de Exportación del Algodón, debía fijar los precios mínimos C. I. F., establecidos bienalmente, que se pagarían a los exportadores del algodón producido en cada uno de los Territorios de Ultramar teniendo en cuenta los diferentes costos de producción y de transporte, así como otros gravámenes. La correspondencia entre estos precios y los precios efectivos de mercado del algodón de Ultramar, que se fijaba también oficialmente, se mantenía por conducto de un fondo de estabilización derivado de un gravamen especial de 50 centavos por kilogramo de algodón importado de otros países.

86. En 1938 el Decreto 28.697 (25 de mayo) estableció la Junta de Exportación del Algodón Colonial (*Junta de Exportação do Algodão Colonial*) con sede en Lisboa, para a) coordinar las actividades relacionadas con la producción y distribución del algodón en los Territorios de Ultramar; b) supervisar la producción y comercialización del algodón y garantizar que las compras a cultivadores africanos se hicieran conforme a las exigencias legales y a los precios oficialmente fijados; y c) promover mejoras en la calidad y cantidad del algodón producido. Entre sus funciones concretas figuraban: asesorar a los gobernadores de cada Territorio con respecto a los precios de compra oficiales para el algodón africano y a la expedición de licencias y concesiones; designar las regiones dedicadas al cultivo del algodón; otorgar préstamos a productores y comerciantes; clasificar el algodón y expedir permisos de exportación. Además, ejercía las funciones de comprador y exportador asegurando así que todo el algodón disponible se exportara.

87. La Junta dependía del Ministro de Colonias y se componía de un presidente, un vicepresidente y de tres miembros que representaban a los comerciantes metropolitanos en algodón de ultramar y a los productores (compañías concesionarias y agricultores no africanos) en cada uno de los dos Territorios; todos eran designados por el Ministro. En Mozambique y Angola estaba representada por "delegaciones" con inspectores y demás personal técnico. En principio, los agentes de la Junta debían supervisar la labor de los concesionarios y aprobar sus campañas anuales del algodón, particularmente con respecto a la selección de las tierras para cultivo del algodón. Según una fuente⁷, sin embargo, que describe la situación en Mozambique septentrional, la Junta

no siempre disponía de personal bastante para fiscalizar las campañas en todas las concesiones y en la práctica la selección de las tierras para cultivo del algodón era más probable que la hicieran los agentes de los concesionarios.

88. Según el decreto de 1938, los ingresos de la Junta provenían de: a) un impuesto especial de 3 centavos por kilogramo sobre todo el algodón que importaba Portugal desde los Territorios de Ultramar; b) una cantidad igual deducida del impuesto sobre el algodón que importaba Portugal desde otros países (véase el párr. 85 *supra*); c) asignaciones especiales para fomento del algodón; d) pagos por conceptos de licencias, multas e intereses sobre el capital; y e) impuestos especiales establecidos por la Junta con autorización de los gobiernos territoriales. En 1946 los ingresos de la Junta aumentaron con la imposición de un tributo de 50 escudos por tonelada de algodón comprada a africanos pagadero por todos los concesionarios y comerciantes (Decreto 35.844, artículo 38).

89. Entre 1937 y 1946 la producción de algodón en Mozambique y Angola experimentó un aumento que excedió del doble, pero debido a un incremento progresivo del consumo, representaba todavía sólo el 65% de las importaciones de algodón de Portugal. Entre tanto, sin embargo, la presión sobre los africanos para que cultivaran algodón hizo que se descuidaran otros cultivos con el resultado de que en 1942 y más tarde se produjeron graves escaseces de alimentos en Mozambique, sobre todo en la zona norte donde se cultivaba más intensivamente el algodón. Por otra parte, el cultivo del algodón se había extendido a zonas relativamente inapropiadas para ello en menoscabo de otras actividades productivas.

90. Con objeto de remediar estos defectos y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de la producción, Portugal revisó la legislación básica relativa al algodón en 1946. El nuevo decreto (Decreto 35.844, de 31 de agosto de 1946) reorganizó las concesiones de algodón para que correspondieran a las divisiones administrativas (*concelhos o circunscrições*) que en lo sucesivo se denominaron "zonas del algodón", consistiendo la importancia de este cambio en que permitía a la Junta de Exportación del Algodón ejercer una función supervisora más directa sobre las actividades agrícolas dentro de las zonas exigiendo a las autoridades administrativas locales que cumplieran sus instrucciones. En virtud del nuevo decreto, le incumbía a la Junta seleccionar las zonas del algodón y eliminar las áreas que consideraba inadecuadas para cultivar algodón, determinando las áreas dentro de las zonas que deberían destinarse al algodón y supervigilando directamente la labor de los concesionarios. Además de formular instrucciones normativas (*bases*), que los funcionarios debían acatar, la Junta aprobaba también el programa anual de trabajo de cada concesionario, que tenía que incluir planes no sólo para el cultivo de algodón por africanos sino asimismo para el cultivo supervisado de productos alimenticios en rotación con el algodón. Además, al elaborar sus programas de trabajo, los concesionarios estaban obligados a concentrar las áreas de cultivo de algodón a fin de permitir, entre otras cosas, el uso en común por los cultivadores del equipo proporcionado por el concesionario, y también promover la estabilización de la población africana en asentamientos rurales (*aldeamentos*).

91. El decreto de 1946 ampliaba igualmente las responsabilidades de los concesionarios con respecto a la elaboración del algodón. Mientras previamente su obligación se había limitado a la compra y desmotado del algodón cultivado por africanos, en lo sucesivo debían además desmotar algodón en beneficio de agricultores y comerciantes autónomos (en su mayoría europeos) en sus zonas a cambio de una comisión fija, así como proceder a la elaboración de todo excedente de semillas de algodón, bien para exportarlo, o bien para venderlo localmente.

92. Por último, el decreto imponía dos contribuciones adicionales al algodón comprado a africanos: a) un impuesto de 50 escudos por tonelada que se utilizaría para sufragar los mayores desembolsos de la Junta, y b) un impuesto de 10 escudos por tonelada para financiar un Fondo del Algodón que se destinaría a la prestación de servicios sanitarios, educativos y de bienestar en las zonas del algodón. Técnicamente ambos impuestos

* Estos cupos fueron establecidos por el *grémio* de importadores de algodón (véase la primera parte *supra*).

⁷ Nelson Saraiva Bravo, "A Cultura Algodoeira na Economia do Norte de Moçambique", Junta de Investigações do Ultramar, *Estudos de Ciências Políticas e Sociais*, No. 66 (Lisboa, 1963), págs. 112 a 122.

tos eran pagados por los concesionarios y los comerciantes, pero en la práctica se descontaron de los mayores precios del algodón pagados a los agricultores.

93. El decreto de 1946 extendió la duración de las concesiones del algodón por un período de diez años y en consecuencia éstas expirarían en 1956. En 1953 la producción combinada de Mozambique y Angola excedía ya de las necesidades de Portugal de esos tipos de algodón que producían los Territorios* y en 1955 era aproximadamente un 60% mayor que la de 1946. Los excedentes se exportaron a otros países extranjeros o fueron absorbidos por pequeñas industrias textiles en los Territorios, cuyo desarrollo era sin embargo restringido por una legislación evidentemente orientada a proteger los intereses de las hilanderías metropolitanas (véase la sección IV *infra*).

94. En 1955 la legislación básica que regía el régimen del algodón fue de nuevo revisada (Decreto 40.405, de 24 de noviembre de 1955). Entre las reformas, el nuevo decreto establecía cuotas obligatorias, las cuales se determinarían anualmente según las necesidades de la industria textil metropolitana, que cada Territorio debía suministrar a Portugal antes de exportar a cualquier otro país; los importadores portugueses tenían sin embargo derecho de opción sobre todo algodón exportado tras cubrir las cuotas. Para el algodón exportado con arreglo a las cuotas, los precios de exportación se fijaban oficialmente teniendo en cuenta "una justa remuneración de productores e industriales, el grado de reorganización alcanzado en la industria (textil) nacional" y los gastos de transporte marítimo. El algodón exportado a otras partes se vendía a las cotizaciones del mercado libre y estaba sujeto a derechos de exportación más elevados, que eran semejantes a los que gravaban el algodón suministrado a las manufacturas textiles locales en el Territorio.

95. Una segunda innovación hecha en 1955 fue la ampliación del Fondo del Algodón creado en 1946 para transformarlo en un fondo de fomento para las zonas del algodón. Según la nueva definición, los propósitos del fondo eran: a) suministrar servicios médicos y de bienestar a los cultivadores de algodón africanos; b) estimular el desarrollo rural; c) socorrer financieramente a los cultivadores de algodón en años de mala cosecha; d) realizar investigaciones sobre el algodón y suministrar equipo agrícola; e) rozar las tierras para colonizaciones agrícolas; y f) financiar parcialmente las operaciones de las cooperativas africanas (véase *infra*). Para permitir al Fondo desempeñar estas nuevas funciones, además del impuesto adicional sobre las importaciones de textiles extranjeros (véase el párr. 83 *supra*), el impuesto pagado por tonelada de algodón comprada a africanos se elevó de 10 a 20 escudos y un nuevo gravamen, igual al derecho de exportación, se impuso sobre todo el algodón exportado a países distintos de Portugal. Este gravamen adicional se impuso asimismo sobre el algodón utilizado para la manufactura textil local, incrementando con ello la diferencia de precios entre estas dos categorías de algodón, por una parte, y el algodón expedido a Portugal en virtud del cupo.

96. Una tercera novedad fue la inclusión de una disposición en el decreto de 1955 que permitía el establecimiento de sociedades cooperativas de cultivadores de algodón africanos (Decreto 40.405, artículos 34 a 36), sujeto a la limitación de que podían dedicarse a desmotar algodón únicamente si estaban situadas fuera de las zonas del algodón, donde la elaboración era un monopolio de los concesionarios. Como casi todas las áreas de un tamaño considerado adecuado para el algodón habían sido reservadas como zonas del algodón y por tanto otorgadas en concesión, esto restringió en efecto el campo abierto a las cooperativas africanas al cultivo efectivo del algodón y a la propiedad colectiva del equipo de labranza. Una ventaja importante significó sin embargo el hecho de que las cooperativas pudieran vender su producto, como los agricultores autónomos (europeos y equiparados), a precios del mercado libre que, según una fuente, por término medio en Mozambique eran casi un

20% más elevados que los precios fijados oficialmente y pagados a los cultivadores africanos**.

III. REGLAMENTACION Y CONTROL DEL ALGODON EN RAMA DESPUES DE 1961

97. El propósito de la legislación del algodón descrita anteriormente había sido movilizar todos los recursos disponibles para obtener el desarrollo máximo de la producción del algodón dentro del plazo más breve posible. En 1960 parecía haberse alcanzado esta meta, pues durante ese año la producción de algodón en rama en los Territorios de Ultramar alcanzó la cifra sin precedentes de casi 160.000 toneladas (140.000 toneladas en Mozambique y 20.000 toneladas en Angola). En 1961 y 1963 se introdujeron cambios en el régimen del algodón con miras a eliminar el sistema de concesionarios y reemplazarlo por otro denominado de "competencia controlada" (*concorrência equilibrada*).

98. La primera reforma importante se implantó por Decreto 43.639 (2 de mayo de 1961) que a) puso fin a toda intervención de las autoridades administrativas en la producción y comercio del algodón, y b) declaró que dentro de las zonas del algodón su cultivo era voluntario (*livremente praticada*), sujeto únicamente a la orientación técnica de la Junta de Exportación del Algodón.

99. En el transcurso del mismo año, los Decretos Leyes 43.874 y 43.875 (24 de agosto de 1961) abolieron la Junta de Exportación del Algodón y la sustituyeron por sendos Institutos del Algodón en Mozambique y Angola. Esta reforma, que coincidió con una medida análoga respecto de las juntas de exportación del café y del maíz (véase la primera parte), se atiene a la política establecida en 1937 (Decreto 26.757) en virtud de la cual las juntas reguladoras de productos importantes de exportación se reemplazarían en definitiva por institutos corporativos.

100. Uno de los resultados de esta reforma fue que permitió mayor control en la esfera territorial, pues aunque la autoridad suprema incumbía al Ministro de Ultramar, cada instituto depende inmediatamente del Gobernador General del Territorio, quien nombra su consejo, compuesto de un director, un director adjunto y tres miembros, que representan a los productores, exportadores y servicios administrativos locales. Sólo con respecto a la fijación de precios los consejos informan automáticamente al Ministro, pues esto implica coordinación entre los Territorios.

101. En general, las funciones encomendadas a los institutos en 1961 fueron las mismas que competían a la Junta. El Decreto Ley 43.875 especifica, sin embargo, que uno de sus objetivos es "fomentar la organización corporativa y la solidaridad" entre los distintos sectores de la industria, y se les exige "defender los intereses de los pequeños productores asegurando la observancia de las exigencias y los precios legales y promoviendo organizaciones por conducto de las cuales pueda lograrse el bienestar económico y social de esos pequeños productores". Por otra parte, mientras únicamente los productores europeos debían registrarse en la Junta, el nuevo decreto ley dispone que en Angola todos los productores cuyas granjas (*lavras*) excedan de cierta superficie han de registrarse.

102. Con el establecimiento de los Institutos del Algodón, el Fondo de Fomento del Algodón, financiado principalmente con los impuestos deducidos de las cantidades pagadas a los africanos por su algodón, quedó abolido. En su lugar se crearon en cada Territorio sendos fondos de fomento del algodón cuyos ingresos provenían, en virtud de la legislación de 1961, principalmente de: a) los impuestos pagados por los concesionarios y calculados sobre la base del precio C.I.F. del algodón que importaba Portugal; b) los aumentos del precio del algodón en rama en Portugal; c) un impuesto de 35% del valor de exportación de la semilla de algodón o de su valor al por mayor cuando se suministraba a la industria local; y d) ciertas entradas de los institutos. En cada Territorio los impuestos se fijan anualmente por el Gobernador General.

* En 1953 Portugal obtenía el 97% de sus importaciones de algodón de los Territorios de Ultramar, representando el mayor volumen alrededor de 47 veces la cantidad suministrada en 1925.

** Bravo, *op. cit.*

103. Los nuevos fondos de fomento del algodón fueron investidos de funciones más amplias que su predecesor. Con arreglo al artículo 35 del Decreto Ley 43.875 se les utiliza para: a) subvencionar a los órganos oficiales que prestan asistencia técnica y social a los productores de algodón; b) conceder subsidios y préstamos a las cooperativas del algodón; c) fomentar la agricultura y la ganadería en las regiones algodonerías; d) hacer investigaciones técnicas; e) mantener precios oficiales y financiar las actividades comerciales de los Institutos; f) otorgar subsidios a los productores de algodón en caso de malas cosechas; y g) rozar tierras para dedicarlas al cultivo del algodón.

104. La creación de institutos y fondos de fomento del algodón separados no alteró las características básicas del régimen del algodón, pero allanó el camino para transformaciones más radicales introducidas en 1963.

105. El Decreto Ley 45.179 (5 de agosto de 1963) y el reglamento para su aplicación (Decreto 45.550, de 30 de enero de 1964) prevén una revisión completa del régimen del algodón. Así, las concesiones de algodón se eliminan progresivamente y quedarán suprimidas el 31 de agosto de 1966. En los lugares en que dejen de existir las concesiones, las compras de algodón en rama podrán ser hechas por comerciantes registrados (particulares o compañías) y los propios Institutos del Algodón; para registrarse en uno de los Institutos, un comerciante debe poseer los fondos necesarios, la organización y capacidad técnica para llevar a cabo las operaciones y pagar una matrícula anual de 10.000 escudos.

106. El nuevo sistema exige que cada año los Institutos del Algodón fijen precios de compra mínimos para la semilla de algodón, basados en los precios de exportación del algodón en rama (fibra). Una vez fijados estos precios, se invita a los comerciantes a hacer propuestas para obtener el derecho de comprar semilla de algodón en cada mercado autorizado, correspondiendo al comerciante que ofrezca los precios más altos el derecho exclusivo a comprar algodón en el mercado de que se trate con la obligación de comprar todo el algodón ofrecido a los precios que se ha comprometido a pagar.

107. Puede obtener licencia para desmotar algodón todo particular o compañía que posea una o más desmotadoras, sea un miembro registrado del Instituto y pague una matrícula anual de 10.000 escudos por desmotadora. Las desmotadoras están obligadas a elaborar algodón para los comerciantes, productores o el Instituto, previo pago de una comisión fijada por el Gobernador General del Territorio. Claro está que nada impide a un solo individuo o compañía registrarse tanto como comerciante y como desmotador.

108. En virtud del nuevo sistema, cada Instituto del Algodón ha pasado a ser el único organismo regulador en su respectivo Territorio, tomando a su cargo el personal sobre el terreno de los anteriores concesionarios y sus funciones respecto de los cultivadores de algodón a medida que se elimina cada concesión. Los Institutos obtienen recursos de a) los derechos de licencia; b) las entradas de sus propias operaciones comerciales; c) la participación en los ingresos de los Fondos de Fomento del Algodón, que a su vez se financian con i) un impuesto por cada kilogramo de algodón bruto comprado; ii) un impuesto sobre las exportaciones de algodón en rama, que puede oscilar entre 3% y 5% del precio C.I.F.; iii) un impuesto de 35% del valor de exportación de la semilla de algodón, o del precio en almacén si ésta se consume localmente. Los dos primeros impuestos son determinados anualmente por el gobierno de cada Territorio.

109. Con respecto a los controles de exportación, el nuevo sistema mantiene las disposiciones anteriores relativas al establecimiento de cuotas territoriales para el suministro de algodón en rama a Portugal, determinando anualmente estas cuotas el Ministro de Ultramar y el Ministro de Economía sobre la base de las recomendaciones de la Comisión Reguladora. El suministro de algodón a la industria local y las exportaciones a otros

países extranjeros son reguladas por el Instituto respectivo. A este efecto, el nuevo sistema entraña una transición, pues el artículo 18 del Decreto Ley 45.179 dispone que "dentro de un período máximo de cinco años, el comercio de algodón de ultramar se efectuará según normas análogas a las practicadas en el mercado internacional".

IV. LOS TEJIDOS DE ALGODÓN EN ANGOLA Y MOZAMBIQUE

110. Una descripción del régimen del algodón no sería completa sin una referencia a la legislación que rige el desarrollo de las industrias textiles en los Territorios de Ultramar. Debido a que el propósito del régimen originalmente era producir una oferta de algodón en rama a las hilanderías metropolitanas que contribuían apreciablemente al sector de exportación de la economía de Portugal, no se expedían autorizaciones para la manufactura local de tejidos durante los primeros años del régimen. Según se explicaba en la introducción a un decreto (No. 26.509) de 1936, la política oficial portuguesa, que se modificó desde 1961, era considerar a los Territorios de Ultramar principalmente como abastecedores de materias primas para las industrias metropolitanas por motivo de que éstas se hallaban en una relativa desventaja con respecto a la disponibilidad de mano de obra calificada. Según ese decreto, las manufacturas locales se restringirían a productos que utilizaban materias primas locales y para los cuales había un mercado local garantizado o que podían producirse para la exportación a menos costo que en Portugal.

111. En 1944, como la producción de algodón crecía rápidamente y ya representaba casi el 60% de las necesidades industriales de la metrópoli, el Gobierno portugués dictó el Decreto Ley 33.924 que autorizaba la manufactura de tejidos de algodón en los Territorios de Ultramar con ciertas restricciones sobre la producción encaminadas a proteger a la industria metropolitana. El decreto ley disponía que la producción de tejidos de algodón para el consumo en cada Territorio no excedería de la diferencia en el peso entre la importación anual media de textiles de algodón de ese Territorio durante el trienio 1936-1938 y el mismo promedio más 20% de tejidos de algodón importados desde Portugal.

112. El decreto ley consignaba dos excepciones a esta limitación: a) el límite no se aplicaría a tejidos producidos para exportarlos a países no portugueses y b) cada Territorio podría abastecer a los demás Territorios de Ultramar siempre que estos últimos no cubrieran sus propias cuotas de producción. En efecto, sin embargo, estas disposiciones fueron anuladas en el año siguiente por el Decreto Ley 34.643 (1° de junio de 1945), que prohibió la autorización de nuevas fábricas de tejidos de algodón en cualquier Territorio de Ultramar que ya había alcanzado su capacidad asignada.

113. Una de las consideraciones aducidas en relación con la legislación de 1944 fue que contribuiría a la modernización de la industria metropolitana el permitir la transferencia del equipo existente a los Territorios de Ultramar. En realidad, el decreto ley exigía que se diera preferencia a las compañías textiles existentes en Portugal en la concesión de autorizaciones para operar en los Territorios de Ultramar. Si ellas no ejercían este privilegio, tenían el derecho a comprar el 40% del capital registrado de toda nueva compañía al precio nominal. Las nuevas industrias estarían exentas del pago de impuestos locales y derechos de internación respecto de su equipo y suministros durante un período inicial, pero, con objeto de proteger a los productores metropolitanos, el precio local del algodón en rama sería el mismo que el pagado en Portugal. A este fin, el algodón vendido a las industrias locales estaba sujeto a los mismos impuestos que gravaban el algodón exportado^{bb}.

^{bb} La política oficial a este respecto parece que ha variado. Así, el Decreto Ley 35.844 (artículo 59) de 1946 disponía que el impuesto especial sobre las exportaciones de algodón gravaría asimismo el algodón suministrado a las industrias locales; el Decreto Ley 37.523 (artículo 10) de 1949 exoneraba a estas últimas de todo derecho de exportación; y el Decreto 40.403 (artículo 59) de 1955 restablecía el impuesto.

114. Desde 1944 varias fábricas de tejidos de algodón se han establecido en Mozambique y Angola. Sin embargo, sólo dos de éstas son importantes, una en cada Territorio, y ambas pertenecen a la misma compañía, la Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial que tiene su sede en Lisboa y pertenece conjuntamente al Estado portugués y a intereses textiles metropolitanos (los pormenores de las industrias textiles se dan en estudios separados sobre la agricultura y la elaboración en cada Territorio).

115. En ambos Territorios los tejidos de algodón ocupan todavía el segundo lugar en las importaciones en función de su valor. En 1964 las importaciones de tejidos de algodón representaron 370 millones de escudos (8% de las importaciones) en el caso de Angola, y 334 millones de escudos (7,4% de las importaciones) en el caso de Mozambique. Por obra de los derechos protectores, la mayoría de estas importaciones procedieron de Portugal. En la actualidad, sólo Mozambique exporta tejidos de algodón y el valor de estas exportaciones ascendía a sólo 1.500.000 escudos en 1962.

116. Con la nueva política respecto del desarrollo económico dentro de la zona del escudo, que se describió en la primera parte *supra*, la actitud oficial de Portugal hacia la reglamentación de la industria textil de algodón en los Territorios de Ultramar ha experimentado transformaciones fundamentales. En noviembre de 1965 se dictó un decreto ley que revocaba la legislación precedente de 1944 y 1945 y disponía que en lo sucesivo la autorización de nueva capacidad manufacturera textil de algodón incumbiría a las autoridades de cada uno de los Territorios de Ultramar, las que se atenderían exclusivamente a las necesidades de desarrollo de ese Territorio.

V. REPERCUSIONES DEL REGIMEN DEL ALGODON

A. Importancia económica para Portugal metropolitano

117. En 1960 Portugal ocupaba el duodécimo lugar entre los productores europeos de hilo y tejidos de algodón. Su industria textil de algodón comprendía 419 fábricas que empleaban a más de 70.000 trabajadores, y el valor de su producción ascendía a unos 4.000 millones de escudos. El hilo y los tejidos de algodón son la exportación principal de Portugal. En 1963 produjo un ingreso de exportación de 1.500 millones de escudos, o sea, aproximadamente una octava parte del valor de las exportaciones visibles del país.

118. El rápido crecimiento de la industria después de la segunda guerra mundial puede comprobarse por el volumen creciente del algodón en rama importado (véase el cuadro 1). Durante los años 1929-1931, el consumo medio de algodón fue únicamente de 17.000 toneladas; en 1942-1945 el promedio subió a 24.000 toneladas, pero en 1964 había aumentado a casi 77.000 toneladas. En 1963 el algodón en rama importado por Portugal costó 1.328 millones de escudos, o sea más del 6% del valor de las importaciones de Portugal.

119. El acceso a las producciones de Mozambique y Angola contribuyó al crecimiento de la industria metropolitana en dos formas. En primer lugar, redujo la demanda de divisas, especialmente durante y después de la segunda guerra mundial,

cuando la oferta de algodón era escasa en los mercados mundiales y los precios por consiguiente elevados. Así, durante el decenio de 1946-1955, un promedio de 87% de las necesidades de algodón en Portugal provenía de los dos Territorios en virtud del sistema de cupo de exportación obligatorio. Después de 1956, cuando la oferta mundial aumentó y los precios disminuyeron mucho, Portugal pudo ampliar su consumo recurriendo a fuentes extranjeras. A partir de 1956-1963 el porcentaje de las importaciones totales de algodón suministrado por los Territorios de Ultramar representó por término medio sólo el 70% y en 1964 únicamente el 41%.

120. En segundo lugar, fijando los precios oficiales del cupo por debajo de los que regían para el algodón importado de otros países, Portugal pudo reorganizar y reequipar su industria textil durante el período de postguerra, que se caracterizó en su mayor parte por ser muy elevados los precios mundiales del algodón. Comparando las columnas 9 y 10 del cuadro 1, puede observarse que el algodón suministrado por los Territorios de Ultramar era más barato que el algodón importado de otros países. Cabe señalar, sin embargo, que mientras una gran parte de las expediciones desde los Territorios de Ultramar comprendían fibras de baja calidad, el algodón obtenido de otros países se componía en su mayoría de calidades superiores. Un cuadro más exacto puede obtenerse parangonando las calidades análogas. Según los datos publicados por la Comisión Reguladora del Comercio de Algodón en Rama, el precio medio C.I.F. en Portugal del algodón importado desde Mozambique durante las campañas agrícolas de 1947-1948/1954-1955 era de 14,08 escudos por kilogramo, en tanto que el mismo algodón, si se hubiera vendido sobre la base de las cotizaciones internacionales, habría alcanzado un precio medio de 27,12 escudos^{cc}. Según una fuente^{cd}, el algodón enviado a Portugal desde los Territorios de Ultramar en 1955, si se hubiera vendido según las cotizaciones internacionales, habría representado una cantidad suplementaria de 400 millones de escudos, o sea, un 68% más de lo que se obtuvo en virtud de los precios oficiales del cupo.

121. Después de 1956, cuando los Estados Unidos empezaron a subvencionar las exportaciones de fibra de calidad superior, los precios mundiales, en particular del algodón de baja calidad, descendieron apreciablemente. En las campañas agrícolas de 1955-1956 el precio medio C.I.F. del algodón de Mozambique fue de 16,06 escudos, en comparación con 18,84 escudos del algodón extranjero de calidad análoga, y en el año civil de 1960 los precios medios fueron, respectivamente, de 17,78 y 18,50 escudos. Aunque los precios de cupo del algodón de calidad superior (calidades 1 a 3) de los Territorios de Ultramar se mantuvieron ligeramente por debajo de las cotizaciones internacionales entre 1956 y 1960, los precios de cupo del algodón de calidad inferior fueron notablemente más elevados. A mediados de 1958, por ejemplo, los precios de importación C.I.F. de las calidades 5 y 6 en virtud del cupo fueron de 14,60 y 13,60 escudos, respectivamente, en tanto que los precios correspondientes para el algodón de los Estados Unidos F.O.B. Houston, Texas, fluctuaron entre 8,50 y 10 escudos.

122. El cuadro siguiente, que indica la cantidad y el valor del algodón en rama importado por Portugal, se basa en datos publicados con los auspicios de la Junta de Investigações do Ultramar, órgano oficial.

^{cc} Portugal: Comissão Reguladora do Comércio de Algodão em Rama. *Boletim*, 1948-1960.

^{cd} Bravo, *op. cit.*

CUADRO 1

PORTUGAL METROPOLITANO: IMPORTACIONES DE ALGODÓN EN RAMA

Año	Desde Angola		Desde Mozambique		Desde otros países		Importaciones totales		Porcentaje procedente de los Territorios de Ultramar	
	Miles de toneladas	Millones de escudos	Miles de toneladas	Millones de escudos	Miles de toneladas	Millones de escudos	Miles de toneladas	Millones de escudos	Volumen	Valor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1946-50*	5,4	65,9	24,4	280,1	3,8	88,7	34,0	436,5	88,6	80,0
1951-55*	5,4	84,0	30,7	469,3	6,5	209,6	42,6	762,9	84,7	73,2
1956	5,5	89,7	21,1	339,2	13,2	290,3	39,8	719,1	66,8	59,6
1957	7,1	127,6	22,1	379,8	17,9	377,7	47,2	885,0	62,0	57,3
1958	6,1	109,8	35,4	619,2	6,5	140,6	48,0	869,6	86,5	83,8
1959	5,7	102,7	29,2	510,1	14,2	267,8	49,1	880,5	71,1	69,6
1960	8,8	155,4	37,7	706,0	9,0	179,1	57,5	1.040,5	84,3	82,8
1961	4,9	87,5	42,1	755,3	20,2	407,8	67,3	1.252,9	69,9	67,3
1962	3,9	71,1	29,1	523,8	32,2	631,5	65,3	1.226,4	50,6	48,5
1963	5,7	106,1	36,3	648,5	30,0	573,5	72,0	1.328,1	58,4	56,8
1964	3,1	54,0	28,5	525,8	45,2	846,7	76,8	1.426,4	41,2	40,7

Fuente: Los datos hasta 1961 inclusive se han tomado de N. S. Bravo, *op. cit.* Los datos de 1962 a 1964 han sido proporcionados por Portugal, *Comércio Externo*.

* Promedio anual.

B. Importancia económica y social para los Territorios de Ultramar

123. Antes de 1961, año en que se abolió el cultivo obligatorio, el algodón se explotaba en Angola y Mozambique con arreglo a un sistema que equivalía al cultivo forzoso. En Angola, la legislación local dictada desde 1908 hasta 1949 exigía cultivar algodón a los africanos que vivían en ciertas áreas y no se dedicaban a otras ocupaciones. La reglamentación más completa fue una Orden del Gobernador General, de fecha 5 de enero de 1949, que disponía que dentro de las zonas del algodón las áreas mínimas de cultivos de algodón y productos alimenticios las fijaría cada año el Gobernador General, a propuesta de la Junta de Exportación del Algodón, y que todos los africanos en edad de trabajar (esto es, entre 18 y 60 años de edad) cultivarían algodón y productos alimenticios conforme a las instrucciones^{**}. La Orden disponía además que el cultivo se practicaría de conformidad con las normas prescritas por la Junta de Exportación del Algodón, supervisando la observancia de estas normas los agentes de las compañías concesionarias, quienes informarían de todo incumplimiento a las autoridades administrativas para que adoptasen las medidas del caso^{††}. En Mozambique no se dictó una legislación de esta naturaleza, pero se obligaba sin embargo a los africanos que vivían en las zonas del algodón a cultivar algodón, puesto que en virtud del Estatuto de los Indígenas tenían la obligación de trabajar y de pagar impuestos, y dentro de estas zonas del algodón se prescribían los cultivos comerciales. Por otra parte, en virtud del Estatuto de los Agricultores Indígenas, un agricultor africano podía ser privado de su tierra si no la cultivaba en la forma exigida por el Gobierno. Los testimonios acreditan que se ejercía una fuerte presión sobre los africanos para que cultivaran algodón aun en tierras marginalmente adecuadas, con el resultado de que los ingresos del cultivador eran a veces

exageradamente bajos (véase *infra*) y se hizo indispensable supervisar el cultivo rotativo de productos alimenticios con objeto de prevenir escaseces de alimentos. Aunque la legislación metropolitana no autorizaba concretamente la compulsión, el ejercicio de una fuerte presión oficial sobre el cultivador africano puede inferirse de la obligación impuesta a las autoridades administrativas locales de desplegar esfuerzos persistentes por fomentar el cultivo del algodón, supervisar su cultivo por africanos (Decreto 21.226) y asistir a los concesionarios haciendo propaganda (Decretos 35.844 y 40.405). Además, la prohibición de contratar africanos en las zonas del algodón para que trabajaran fuera de éstas (Decretos 21.226 y 35.844), aunque no afectaba el derecho de migración voluntaria, hacía difícil para los africanos encontrar distintos medios de empleo remunerado con objeto, entre otras cosas, de pagar sus impuestos. Estos asuntos fueron objeto de un examen detallado por una comisión de la Organización Internacional del Trabajo en 1961-1962 y en su informe se hace referencia a ellos^{‡‡}. Según se mencionó, el Estatuto de los Indígenas y toda la legislación que preveía el cultivo obligatorio del algodón, o la intervención de los funcionarios administrativos, fueron revocados en 1961.

124. Desde el punto de vista económico, la importancia del algodón para Mozambique y Angola deriva no sólo de su preeminencia como artículo exportable, sobre todo en el caso de Mozambique, sino también del hecho de que es el principal cultivo comercial de un número muy grande de productores africanos. En 1961, el valor del algodón bruto africano producido en Mozambique fue de 379.900.000 escudos y el número de cultivadores ascendió aproximadamente a 520.000. Por tanto, el valor medio per cápita alcanzó a unos 720 escudos. En Angola el valor medio per cápita fue de 950 escudos para un total de 46.676 cultivadores.

125. Hasta 1963 los precios del algodón despepitado y los precios pagados a los cultivadores africanos por el algodón bruto se fijaron oficialmente. En 1963, como primera medida

^{**} Para la campaña agrícola de 1948-1949 las áreas mínimas que debían cultivarse variaron de 0,25 a una hectárea de algodón y un área igual de productos alimenticios, según la edad, el sexo y el estado civil del individuo.

^{††} Decreto 6.619, de 5 de enero de 1949. La legislación anterior comprendía el Instrumento Legislativo 386, de 24 de septiembre de 1923; 5, de 6 de septiembre de 1928; y 242, de 13 de enero de 1930.

^{‡‡} Oficina Internacional del Trabajo, *Informe de la Comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la queja presentada por el Gobierno de Ghana relativa a la observancia por el Gobierno de Portugal del Convenio (No. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso*, 1957, Ginebra, 1962.

hacia la supresión definitiva de los controles de precios^h, se decretó que sólo se fijarían precios mínimos para el algodón bruto, a fin de permitir las licitaciones. Sin embargo, en 1964 alrededor del 40% de la cosecha de algodón de Mozambique fue

^h El decreto de 1963 preveía que los precios controlados de exportación se eliminarían después de un período de transición de cinco años. Más tarde el algodón se exportaría a las cotizaciones del mercado libre.

comprado por el Instituto del Algodón a los precios mínimos oficiales debido a la ausencia de ofertas por parte de los comerciantes.

126. Los precios oficiales pagados a los cultivadores africanos por el algodón bruto se determinaron deduciendo del precio de exportación los gastos de transporte, elaboración y otros varios, y fluctuaron según la calidad y la localidad. El cuadro que sigue indica los precios oficiales efectivos en diferentes años en el norte de Mozambique.

CUADRO 2

MOZAMBIQUE: PRECIOS OFICIALES DEL ALGODÓN BRUTO

(Escudos por kilogramo)

Años	Máximo		Medio		Mínimo	
	Primera calidad	Segunda calidad	Primera calidad	Segunda calidad	Primera calidad	Segunda calidad
1947-48	1,60	1,20	1,50	1,10	1,40	1,00
1949-50	1,90	1,50	1,80	1,40	1,70	1,30
1951-55	2,80	2,10	2,70	2,00	2,60	1,90
1956-60	3,10	2,40	3,00	2,30	2,90	2,20
1961	3,70	2,30	3,60	2,20	3,50	2,10

Fuente: Bravo, *op. cit.*

127. Con anterioridad a 1961, los impuestos para el Fondo del Algodón se descontaban de los precios pagados a los cultivadores africanos. Estos impuestos equivalían en 1960 a 0,20 escudos por kilogramo de algodón bruto de primera calidad y 0,30 escudos por kilogramo de algodón de segunda calidad. Con la abolición del Fondo del Algodón en 1961, se eliminaron estos descuentos. En 1962 había únicamente dos precios oficiales para el algodón cultivado por africanos aplicables en todo Mozambique, esto es, 3,70 escudos para el algodón de primera calidad y 2,30 escudos para el algodón bruto de segunda calidad. Las cooperativas y los agricultores europeos, que no estaban sujetos a controles, recibieron un promedio de 20% más que los productores africanos. Según una fuente¹¹, el ingreso anual medio de los cultivadores africanos de algodón en Mozambique septentrional fue de 634 escudos en 1960¹¹.

128. El algodón contribuye al erario de los Territorios por concepto de una serie de impuestos y de derechos de exportación. En 1963 se comunicó que estos diversos gravámenes ascendían a un total de 0,77 escudos por kilogramo de algodón bruto producido en Mozambique, o sea, a unos 92.400.000 escudos. Casi todos estos impuestos y derechos dimanaban de la legislación metropolitana y se aplican por lo tanto también a Angola, aunque el nivel de los impuestos puede diferir. La mayoría, que comprenden en el caso de Mozambique un impuesto de 20 escudos por tonelada sobre las compras de algodón bruto, un impuesto de 0,80 escudos por kilogramo de algodón despepitado producido, junto con varios derechos de exportación y otros gravámenes, se utiliza para financiar los fondos de fomento del algodón en cada Territorio. Las cantidades recaudadas por estos conceptos pueden emplearse para fines de desarrollo general en toda la región que cultiva el algodón, que en Mozambique constituye casi la mitad de la superficie del Territorio. Cabe advertir que entre 1955 y 1961, año este último en que se reemplazó por fondos separados de fomento del algodón en cada Territorio, el Fondo del Algodón, que se utilizó para idéntico propósito, recaudó un total de más de 156 millones de escudos en Mozambique exclusivamente.

¹¹ Bravo, *op. cit.*

¹¹ El promedio disimula amplias variaciones. Así, en 1959-1960 el ingreso por cultivador fluctuó de 129 a más de 3.300 escudos en Mozambique septentrional.

APENDICE II

Industrias agropecuarias y de transformación en Angola

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
I. GENERALIDADES	
A. Función de la agricultura en la economía del Territorio	1-9
B. Estructura de la producción	10-21
II. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS	
A. Café	22-72
B. Sisal	73-90
C. Azúcar	91-113
D. Algodón	114-154
E. Maíz	155-181

CUADROS

	Página
1. Regiones de los principales cultivos y extensión dedicada a los mismos	437
2. Angola: Producción de café	443
3. Angola: Aumento de la producción de café en los principales distritos, 1955 y 1960	444
4. Angola — Café: Exportaciones y principales destinos de éstas, 1955-1964	444
5. Angola — Sisal: Exportaciones y principales destinos, 1955-1964	446
6. Compañías azucareras de Angola: Extensión, capacidad de la fábrica y producción en 1960	448
7. Cuota de azúcar de Angola para fines de exportación al Portugal, por fábrica	448
8. Angola: Producción, consumo y exportación de azúcar	449
9. Angola — Azúcar: Consumo local, exportaciones y principales países de destino, 1955-1964	449

	Página
10. Angola: Producción de algodón bruto por regiones	450
11. Angola: Producción africana de algodón bruto	451
12. Angola: Cultivadores de algodón africanos, superficie y producción supervisados por el Instituto del Algodón, 1961-1964	453
13. Angola: Producción local e importación de tejidos y otros productos de algodón	454
14. Angola: Exportación de aceite de semilla de algodón y otros subproductos	455
15. Angola: Producción y exportaciones de algodón despepitado	456
16. Angola: Exportaciones de maíz y destino de las mismas	458
17. Angola: Exportaciones agrícolas, 1955-1964..	459
18. Angola: Porcentaje del valor total de las exportaciones que correspondió a los productos agrícolas, 1955-1964	459

I. GENERALIDADES

A. Función de la agricultura en la economía del Territorio

1. La economía de Angola sigue siendo agrícola en lo fundamental, pese al aumento de su producción de minerales en estos últimos años. De 1956 a 1964 los productos agrícolas representaron por término medio más del 60% del valor total de las exportaciones visibles. En 1964 las exportaciones de mineral representaron sólo el 20% del total y fueron: diamantes (12,7%), mineral de hierro (4,0%) y petróleo crudo y productos del petróleo (3,4%). Les siguen en importancia los productos de la pesca.

2. Desde comienzos del decenio 1950-1960, el café y el sisal han ocupado un lugar predominante en el sector agrícola de Angola. El café — hoy el principal producto de exportación del Territorio — representó en 1964 casi el 50% del importe total de las exportaciones, frente al 30% en 1950. Con una producción anual de cerca de 180.000 toneladas métricas en las cosechas de 1963 y 1964, Angola se ha convertido en la tercera productora de café del mundo, después del Brasil y Colombia, y su producción representa el 5,7% del suministro mundial.

3. Gracias a los favorables precios, la producción de sisal se duplicó entre los años 1950 y 1955; en 1965, con una producción anual de cerca de 62.000 toneladas, Angola se convertía en la tercera productora mundial de sisal, después de Tanzania y Brasil.

4. El tercer producto de exportación del Territorio es el maíz, que por muchos años ha sido la exportación principal, tanto por su valor monetario como por el volumen exportado. En cambio, en 1964 representó menos del 3% del importe total de las exportaciones visibles del Territorio.

5. En contraste con Mozambique, el azúcar y el algodón no desempeñan ya gran papel en el comercio de exportación del Territorio, y el aumento de producción de ambos artículos lo absorbe casi enteramente el consumo local. Otras exportaciones agrícolas son la mandioca (cruera), la harina de mandioca, el aceite de palma, la nuez de coco, el frijol, el maní y el tabaco. Sin embargo, desde mediados del decenio de 1950-1960, estos cultivos no han llegado a representar el 8% del valor de las exportaciones.

6. Los mercados principales del café angolano son los Estados Unidos de América, el Reino Unido, los Países Bajos, Francia y la República Federal de Alemania. El Portugal es el principal comprador de sisal y de la mayoría de los demás cultivos, varios de los cuales se le suministran exclusivamente (algodón y azúcar) o parcialmente por cuotas fijas.

7. Como se dice en el documento de trabajo precedente (apéndice I), al Gobierno corresponde fijar los precios de ex-

portación de casi todos los productos agrícolas, inspeccionar y vigilar sus grados de calidad y su comercialización. Los derechos de exportación y los impuestos especiales que gravan los productos agrícolas en los puertos angolanos de salida contribuyen no poco a la renta pública del Territorio. Además de los derechos de exportación ordinarios, hubo en 1962, por ejemplo, gabelas especiales que representan el 1,5% *ad valorem* y un recargo de 10 centavos por kilo sobre el café exportado; 3 escudos por tonelada de maíz, 10 centavos por kilo de azúcar, y 25 centavos por kilo de algodón*. Hay también otro impuesto (*imposto de sobrevalorização*) sobre el café, que se calcula a base de la diferencia entre el precio real de exportación y el vigente en 1949^b. En 1962, año en que los derechos de exportación para todos los productos representaron 241 millones de escudos y aportaron una décima parte de la renta total ordinaria, los impuestos especiales adicionales sobre los productos agrícolas ascendieron a 45.500.000 escudos, 41.900.000 de los cuales procedían del café, 3.900.000 del azúcar, y el resto del maíz, la cera de abejas y el algodón.

8. Mientras que una parte de los fondos obtenidos con los impuestos sobre la exportación y otros, sobre el café, el algodón y el maíz, se asignan a los respectivos institutos de esos artículos para financiar sus actividades, incluso trabajos de investigación y divulgación, la mayoría de las divisas obtenidas por las exportaciones angolanas han de entregarse a un Fondo de Divisas común, con lo que la existencia de dólares y libras esterlinas de Angola ayudan al Portugal a enjugar el déficit de su propia balanza de pagos.

9. No hay datos recientes sobre la proporción de habitantes dedicada a la agricultura. Según las estadísticas reunidas por el Instituto de Trabajo de Angola y publicadas en 1964, los asalariados componen el 24% de la mano de obra, y los trabajadores "independientes", el 86% por sectores, un 95,3% está empleado en el sector primario, que abarca a unas 30.000 personas ocupadas en las industrias extractivas, y 58.000 en otras industrias; un 2,4% pertenece al sector secundario, y un 2,3% al terciario. De las estadísticas relativas a la mano de obra migratoria dentro del Territorio se desprende que un 78,9% se dedica a la agricultura y un 6,6% a la ganadería.

B. Estructura de la producción

10. Angola tiene una superficie de 1.241.700 kilómetros cuadrados (481.226 millas cuadradas), o sea, aproximadamente, 14 veces la del Portugal. Su topografía y su distribución de lluvias son variadas y se prestan bien al cultivo de productos de zona tropical y de zona templada. Se calcula que está en cultivo del 2% al 3% de la tierra.

11. La estructura de la agricultura varía de norte a sur. Cabinda, que mide 727.000 kilómetros cuadrados, forma una comarca de rasgos propios, no sólo por estar separada geográficamente del resto de Angola, sino por su gran importancia en la producción de maderas, que representa un 65% del importe de sus exportaciones locales. El 35% restante lo componen el café, los productos de la palmera y otros productos tropicales.

12. El norte de Angola, desde la frontera con la República del Congo (Leopoldville), hasta el valle del Cuanza, es la principal región productora de café. Produce también casi todo el algodón y la mitad aproximadamente del azúcar exportados.

* Entre los productos agrícolas sujetos a un régimen especial de exportación figuraban, en 1956, el algodón, el café, la harina de mandioca, el frijol, el maíz, el aceite de palma y de semillas de palma, el sisal, el cordaje de cáñamo, el tabaco en hojas, las manufacturas de tabaco, el trigo y la harina de trigo. En cambio, los minerales exportados por las compañías citadas a continuación estaban exentos de derechos de exportación: *Angola Diamond Company, Companhia dos Bituminosos de Angola, Companhia de Combustíveis do Lobito, Empresa do Cobre de Angola, Sociedade Mineira de Lombege y Companhia Mineira de Lobito* (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I).

^b En 1957 y 1958, cuando los precios del café alcanzaron su máximo, los ingresos por este impuesto representaron alrededor del 5% de la renta ordinaria del Territorio. Véase el párrafo 62, *infra*.

Esta región es una llanura costera baja, relativamente poco desarrollada, desde la cual el terreno se alza hacia el este para formar una meseta de 1.300 a 3.000 pies de altura, que da acceso gradual a las tierras altas del interior, situadas entre 3.000 y 5.000 pies. El café se cultiva sobre todo en la meseta de Uíge y alrededor de Gabela, tierra adentro de Porto Amboim. Las dos comarcas algodonerías principales están en la llanura costera al sur de Luanda, en cuyo centro se hallan las localidades de Icolo y Bengo, y también a lo largo del ferrocarril de Luanda, sobre todo en los *colcelhos* de Catete y Malanje. Al interior de esta costa se cultivan el *hibiscus caunabinus* y la fibra de abroma, y la Companhia União Fabril (propiedad de portugueses) tiene una plantación de 75.000 hectáreas en la cuenca del Río Bridge, cuyos productos principales son los mencionados. Los valles de los ríos Cuanza y Bengo (como se dice en A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 136 a 140) y la zona contigua a Malanje están en desarrollo para que suministren frutas, legumbres y otros productos al mercado de Luanda para la exportación. Alrededor de Malanje cultivan el tabaco en pequeña escala tanto europeos como africanos. Esta comarca es la mayor exportadora de productos agrícolas y produce también, en pequeña cantidad, melón de indias, palmeras y otros productos tropicales, sobre todo como cultivos de subsistencia del africano.

13. En el centro de Angola el sector principal productor es la meseta de Benguela-Bié, cerca del puerto de Lobito. El sisal es el cultivo principal de exportación. También proceden de esta región el 95% del maíz exportado y casi toda la mandioca. Asimismo se cultiva allí el trigo, el tabaco, el maní, el frijol y otros productos de subsistencia. El azúcar (que por su importancia es el segundo producto de exportación de esta comarca) proviene de las vertientes bajas de los ríos Catumbela y Coporola. Alrededor de Ganda y Bié se produce cierta cantidad de café tipo *arabica*.

14. La región del sur se presta sobre todo a la ganadería. Se calcula que en este sector hay ya más de un millón y cuarto de cabezas de ganado, la mayoría de propiedad africana. En estos últimos años se han introducido medidas oficiales para aumentar la industria ganadera. En Moçamedes se ha creado un matadero industrial refrigerado, se han ampliado los servicios e investigación veterinarios, y se están fomentando las concesiones de tierra para ranchos de ganado con préstamos del Gobierno. Se informa que una empresa de propiedad alemana ha levantado un rancho para la venta de carne de vacuno en conserva.

15. La aridez de la zona limita las actividades agrícolas en el extremo meridional de Angola, que linda con el África Sudoccidental. Sin embargo, desde 1953 el Gobierno está empeñado en el aprovechamiento del valle del río Cunene y, mediante un acuerdo concertado con el África Sudoccidental en 1964, se está desarrollando la capacidad y la fuerza generadora de la presa de Matala, que se utilizará para el riego (A/6000/Rev.1, cap. V, párrs. 66 a 68; *ibid.*, anexo II, párrs. 124 a 135).

16. En el cuadro siguiente se indican los principales cultivos por distritos, así como las superficies (calculadas) de producción.

CUADRO 1

REGIONES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS Y EXTENSIÓN DEDICADA A LOS MISMOS

*Distritos principales**

		Superficie calculada (hectáreas)
Algodón	Malanje, Luanda; Zaire, Cuanza meridional	36.400 (1963)
Café	Uíge, Zaire, Cuanza septentrional, Cuanza meridional, Cabinda	327.000 (1965)

		Superficie calculada (hectáreas)
Caña de azúcar	Luanda, Malanje, Benguela	10.500 (1964)
Sisal	Cuanza septentrional, Benguela, Bié	125.000 (1964)
Trigo	Benguela, Bié, Huambo	17.000 (1942)
Maíz	Congo, Luanda, Huambo, Bié, Huila	560.000 (1942)
Mandioca	Congo, Malanje, Benguela, Bié	125.000 (1955)
Nuez de coco y palmeras	Cabinda, Cuanza meridional, Benguela, Congo	30.000 (1955)
Frijol	Malanje, Benguela, Bié, Huila	100.000 (1955)
Maní	Congo, Malanje, Benguela, Bié	6.000 (1955)
Arroz	Congo, Malanje	14.000 (1955)

* El distrito del Congo se dividió en los de Uíge y Zaire en 1961.

17. El capital europeo predomina en la mayoría de los cultivos de exportación importantes; en cuanto al sisal y el café predominan los colonos particulares o las compañías privadas al paso que las grandes compañías por acciones predominan respecto al algodón y al azúcar. Sin embargo, como la mecanización es escasa en Angola, casi toda la producción de las fincas y plantaciones europeas tiene mano de obra africana. Según los cálculos más recientes (1965) parece haber unos 175.000 asalariados africanos dedicados a las faenas agrícolas, 123.000 de ellos al café, 25.000 al sisal y 15.000 al azúcar. Unos 36.000 africanos cultivan, además de casi todos los productos alimenticios agrícolas tradicionales, el maíz, la mandioca, el boniato, el aceite de palma, el frijol, el maní y la casi totalidad del algodón; y otros 60.000 africanos cultivan, por cuenta propia, alrededor de la cuarta parte del café destinado a la exportación.

18. No hay cifras exactas de producción para los cultivos de exportación ni los alimenticios; no obstante, las cantidades más bien limitadas de cultivos de exportación que se retienen en el Territorio, o se fijan por cuotas (algodón y azúcar), o son relativamente insignificantes (café, y hasta 1965 también sisal). Por otra parte, en cuanto a los cultivos alimenticios producidos por africanos, las exportaciones suelen representar excedentes comprados, pero casi siempre sólo procedentes de sectores accesibles a las líneas de transporte. Sin embargo, éstos son los únicos datos disponibles sobre las actividades del sector africano de subsistencia.

19. Desde que terminó la segunda guerra mundial, la estructura de la producción se ha caracterizado por un fuerte aumento de las cosechas de exportación, sobre todo el café y el sisal (véase el cuadro 17). Aunque este cambio se vio estimulado por los favorables precios mundiales del decenio 1950-1960, la política oficial ha consistido siempre en alentar la producción y la exportación de cultivos de alto precio unitario y, como ya se ha comunicado (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II), en aumentar el asentamiento de europeos. Este cambio en la estructura de la producción ha surtido dos efectos importantes: primero, la mayor parte del comercio de exportación de Angola se orienta hoy hacia mercados extranjeros (en 1964, por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones de café del Territorio y alrededor de una cuarta parte del importe total de las exportaciones fueron a los Estados Unidos de América); segundo, el bajo precio unitario alcanzado en el mercado mundial por los cultivos alimenticios tradicionales de los africanos ha restado a esos cultivos su importancia, tanto en el comercio exterior del Territorio (véase el cuadro 18) como en su calidad de fuente de ingresos para éste; de modo que la planificación gubernamental apenas se ocupa en la agricultura africana.

20. Por ejemplo, las estadísticas disponibles demuestran que entre 1944 y 1960 el volumen anual medio de las exportaciones de seis productos alimenticios cultivados tradicionalmente

por africanos (maní, arroz, mandioca, productos de la palmera, maíz y frijol) aumentó en un 50% aproximadamente, o sea de 135.000 a 208.000 toneladas, pero las exportaciones de cultivos comerciales (que comprenden el azúcar, la borra de algodón, el café, la nuez de coco y el sisal) se duplicaron, pasando la media anual de 98.000 a 206.000 toneladas. Por otra parte, mientras que en 1944 el importe de los cultivos alimenticios exportados alcanzó cerca de dos quintos del valor de los cultivos comerciales (147 millones y 241 millones de escudos, respectivamente), en 1960 los primeros fueron sólo una quinta parte de los segundos. Esta tendencia se ha acentuado aún más desde 1960. En 1964, el valor de las exportaciones de los seis cultivos alimenticios fue de sólo un décimo del valor de los cinco cultivos comerciales (364 millones frente a 3.527 millones).

21. Desde que se introdujo el Plan de desarrollo de transición para los años 1965-1967, se trata de fomentar el aumento de la producción africana reduciendo los derechos de exportación y elevando los precios pagados al productor, a quien se exige hoy día vender sus cultivos en mercados rurales inspeccionados por el Gobierno (véanse los párrafos 153 y 178, más adelante).

II. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

A. Café

Generalidades

22. El cultivo del café en Angola data del pasado siglo, y las primeras exportaciones se realizaron hacia el año 1830. Después de la primera guerra mundial se introdujeron medidas protectoras oficiales y la producción aumentó con firmeza. Salvo el decenio de 1930-1940, en que el mercado mundial del café sufrió en general las fluctuaciones de precio, las exportaciones de café de Angola han seguido aumentando. En 1963-1964, con una producción anual de unas 180.000 toneladas, Angola se convirtió en tercer productor de café, precedida por el Brasil y Colombia. Su producción representó el 5,7% de las exportaciones mundiales de ese producto.

23. Los primeros cafetales fueron los de Ambriz, Massango y Ambaca. Las principales zonas de cultivo del café se hallan en el cuadrante noroeste del Territorio, a unos 100 kilómetros de la costa, en una faja de 50 a 200 kilómetros de ancho cuya altura va de 400 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Como puede verse en el cuadro 2, los distritos de Uíge, Cuanza septentrional y Cuanza meridional producen casi todo el café, y en 1960 dieron más del 92% de la producción total.

24. Casi todo el café cultivado en Angola es del tipo *coffea robusta*. El café tipo *arabica* representa menos del 1% del total y se lo cultiva en su casi totalidad a lo largo del ferrocarril de Benguela, a unos 1.200 a 1.400 metros de altitud; sus centros principales son Ganda y Bié.

Organización de la producción

25. El café se cultiva en plantaciones propiedad de europeos, con mano de obra africana; también lo cultivan particulares, tanto europeos como africanos. De 1955 a 1961 el número de cultivadores europeos pasó de cerca de 600 a más de 2.000; la superficie total en cultivo, en explotaciones de propiedad europea, subió de 198.000 a 420.003 hectáreas, y la producción total (europeos y africanos) aumentó de 69.000 a 169.000 toneladas (véase el cuadro 2).

26. En 1963 casi las tres cuartas partes de los cafetales de propiedad europea medían 100 o más hectáreas de superficie; el 43% de los mismos medían más de 300 hectáreas, el 30% oscilaba entre 100 y 300, y el 27% tenía menos de 100. Los cafetales africanos medían, por término medio, de una a dos hectáreas. En 1964 se comunicó que la superficie dedicada al café abarcaba 500.000 hectáreas, 130.000 de ellas cultivadas por africanos.

27. Como ya se ha mencionado (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrafos 68 a 80), de 1956 a 1961 las explotaciones europeas en los principales distritos cafeteros aumentaron en casi medio millón de hectáreas, y la superficie de cultivo del café aumentó en 150.000. Al afluir nuevos colonos, los terrenos que mejor se prestan al cultivo del café adquirieron tal valor que a menudo fueron ocupados por la fuerza, lo cual suscitó pleitos complicados, no sólo entre las partes que reclamaban terrenos y fijaban sus propias lindes, sino en cuanto a los derechos de los africanos sobre la tierra. En ciertos casos hubo expropiaciones de cafetales cultivados por africanos y, a juicio de la Subcomisión encargada de examinar la situación en Angola, los agravios provocados por tal acción contribuyeron al alzaamiento de 1961*.

28. No hay datos recientes sobre el total de inversiones en café realizadas en Angola por empresas portuguesas y otros intereses extranjeros. Los datos del año 1945 muestran que de los 206 millones de angolares⁴ invertidos entonces, alrededor de dos tercios eran de propiedad portuguesa; el promedio de inversiones era de 326 angolares por hectárea. El promedio de las inversiones de empresas extranjeras era de 1.152 angolares por hectárea. En 1957 se calculó que cada hectárea de café en las explotaciones de europeos exigía un capital de 2.830 escudos. A base de esta cifra, la inversión de capital en 1957 habría sido 750 millones de escudos (24 millones de dólares de los EE. UU.).

29. La mayor productora de café es hoy día la Companhia Angolana de Agricultura, comúnmente conocida por CADA* (véase el párrafo 67 más adelante). Según datos publicados en 1963, esta empresa tenía un capital social de 225 millones de escudos y poseía 18 cafetales, entre ellos el Boa Estrada (de 60.000 hectáreas), que daba empleo a 280 europeos y a 11.580 africanos. En 1964 se dijo que la empresa había aumentado su capital para invitar la participación de empresas extranjeras dedicadas a fabricar cafés solubles. En dicho año, la empresa produjo 11.000 toneladas de café. La CADA posee también palmeras y cocoteros.

30. No hay datos detallados sobre la propiedad de las plantaciones de café y fábricas de transformación en Angola. La mayoría de las grandes plantaciones producen también otros cultivos de exportación. Según la Guía Industrial de Angola de 1961, las fábricas de café y las instalaciones de transformación y descortezamiento de Angola son: cinco en Luanda, una en Cabinda, 50 en el distrito del Congo (dividido hoy en los distritos de Uíge y Zaire), 74 en Cuanza septentrional y 14 en Cuanza meridional. Aparte de la CADA, las grandes empresas dedicadas al cultivo del café son las siguientes:

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Suplemento No. 16 (A/4978), párrafos 336 a 342.

⁴ El angular era la moneda local de la época y equivalía oficialmente a un escudo.

* Según Kavalam Madhu Panikkar (en *Angola in Flames*, Londres, 1962, pág. 59). La Companhia Angolana de Agricultura había sido en un principio una empresa con predominio británico y ocupaba 17.000 kilómetros cuadrados; el cambio de propietario ocurrió en virtud de la ley de nacionalización de 1948.

<i>Nombre de la compañía o del propietario</i>	<i>Distrito</i>	<i>Otros datos</i>
Companhia da Africa Occidental Portuguesa (CAOP)	Cuanza septentrional	Capital: 50 millones de escudos.
Companhia de Cabinda	Cabinda	Capital: 40 millones de escudos.
Sociedade Agrícola do Lucala	Cuanza septentrional	Capital: 18 millones de escudos. Tiene 4.500 hectáreas de café y otras plantaciones. La compañía forma parte de un grupo denominado Organizações Chibera que también posee las plantaciones de azúcar de Bom Jesus.
Companhia do Ambriz S. A. R. L.		Capital: 11.500.000. Esta compañía era también concesionaria de algodón.
Sociedade Cafeicultora Soual	Luanda	Capital: 10 millones de escudos.
Sociedade Agrícola do Encoge-Micula	Luanda	Capital: 10 millones de escudos. La compañía tiene 1.500.000 cafetos y se informa que éstos producen 500 a 600 toneladas de café al año. Posee también palmerales y bananeros. El volumen de operaciones en 1960 ascendió a 21.500.000 escudos.
Mário Cunha	Novo Redondo	Capital: 10 millones de escudos.
Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial (Textang)	Cuanza septentrional	(Véase sección D). La Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial posee interés predominante de 10 millones de escudos en la Cooperativa dos Productores e Exportadores de Café.
Sociedade Comercial e Agrícola Rimaga	Uíge	Capital: 4 millones de escudos. En 1960 las operaciones de la compañía representaron 67.900.000 escudos, con 859.000 escudos de ganancias; en 1961 las operaciones representaron 66.700.000 escudos y las ganancias 739.000 escudos. En 1963 las operaciones bajaron a 55.800.000 escudos y la empresa reconoció una pérdida de 3.200.000.
Empresa Agro-Industrial de Angola (Emangola)	Cuanza	Posee plantaciones de café y sisal y concesiones de algodón.

31. La Junta de Exportación de Café Colonial (Junta de Exportação de Café Colonial¹ comunicó que en 1941, de un total de 23.742.262 kilos de café, la producción africana representó 6.646.000 kilos, es decir, alrededor del 39% del total. Posteriormente, con ayuda, la producción europea aumentó en el 70% durante los cuatro años siguientes y alcanzó un volumen de 29.232.000 toneladas en 1945. En el mismo tiempo la producción africana aumentó sólo en un 27%, y en 1945 representó únicamente el 28,5% del total. De 1945 a 1961, la proporción de la producción africana permaneció entre 25% y 30%.

32. Para estimular a los cafeteros africanos, el Gobernador General publicó en enero de 1956 una orden por la que todo indígena africano titular de más de 3.000 cafetos² sería considerado como cultivador de café y quedaría exento del requisito de la mano de obra. Se confió a la Junta de Exportación del Café la responsabilidad de matricular a los cultivadores indígenas que tuviesen más de 3.000 plantas o un cafetal de más de una hectárea en la zona. Los africanos que reunían estas condiciones recibieron lo que se llamó un "título M/J". Si un africano, por la cantidad y el importe de su cosecha estaba obligado a pagar el impuesto de empresas agrícolas (*imposto sobre explorações*)³, se le eximía del impuesto personal anual aplicable a los africanos. No se dispone de estadísticas que indiquen cuántos africanos fueron reconocidos oficialmente como cultivadores de café en estas condiciones. El número de africanos empleados en cafetales aumentó de 45.000 en 1954 a casi 90.000

en 1959. Según se informó en 1965 había 130.000 africanos empleados en la industria cafetera y 60.000 cultivadores, con un promedio de dos hectáreas cada año.

Reglamentación y vigilancia oficiales

33. Como se dice en el documento precedente sobre organización y controles, el café como principal producto de exportación para obtener divisas estuvo también sujeto hasta 1961 a reglamentación y vigilancia oficiales minuciosas, por conducto de la Junta de Exportación de Café Colonial [Junta de Exportação do Café Colonial (JEC)] creada en 1940, con sede en Lisboa (Decreto 30.714, de 29 de agosto de 1940). Bajo la autoridad del Ministerio de Colonias en lo referente a las actividades en los territorios, y del Ministerio de Industria y Comercio en lo relativo a sus actividades en el Portugal, la Junta tenía a su cargo: a) la producción de café en todos los territorios de ultramar; b) la coordinación, producción y comercialización mediante la reglamentación de los precios y el control de las cuotas de importación y exportación; c) el abastecimiento del mercado nacional del Portugal, y d) la política cafetera exterior del Portugal.

34. En los territorios, la Junta tenía facultades para fomentar o limitar la producción de café; para fijar el precio de compra a los cultivadores indígenas, así como otros precios referentes a las diversas etapas de comercialización y exportación del café; y para reglamentar las cantidades y la calidad del café exportado al Portugal, a los demás territorios de ultramar y a países extranjeros. Tenía a su cargo la clasificación del café, la mejora de la calidad producida y la prestación de ayuda financiera a los cultivadores, fuese directamente o mediante bancos privados. En los territorios donde no se habían creado órganos especiales, la Junta se encargaba de reglamentar las importaciones de café.

¹ Ramos De Sousa, Angola, Junta de Exportação do Café Colonial en Angola, *Cinco Anos de Actividade*, Luanda, 1945.

² Los cultivadores africanos suelen plantar 1.500 cafetos por hectárea; los europeos, unos 1.000.

³ Impuesto que grava también a las empresas ganaderas, forestales y pesqueras.

35. La Junta de Exportación del Café Colonial se componía de un presidente y un vicepresidente designados por el Ministro de Colonias, y tres miembros, que representaban respectivamente a los exportadores de café colonial, a los importadores de café en el Portugal (designado éste por el Grémio dos Armazenistas e Retalhistas de Mercenarias) y al Consejo Técnico Corporativo de Industria y Comercio. La Junta tenía su sede en Lisboa, pero sus principales actividades se desarrollaban en Angola, donde su "delegación" local (*delegação*) tenía más de 150 empleados en 1960. También tenía "delegaciones" locales en Santo Tomé y en Cabo Verde. La Junta de Exportación del Café Colonial obtenía sus ingresos de: impuestos especiales sobre el café exportado; derechos de importación de 6 centavos por kilo de café tipo *robusta*, 25 centavos por kilo de café tipo *arabica* y 25 centavos sobre los cafés extranjeros; derechos de exportación; asignaciones especiales para mejora del café; y multas e intereses del capital inicial. En 1959, último año del que se tienen datos, los ingresos de la Junta de Exportación del Café por impuestos sobre este artículo en Angola pasaron de 16 millones de escudos, y la Junta recibió otros 10 millones del Fondo de Propagación del Café. Su presupuesto total de operaciones rebasó 58 millones de escudos¹.

36. Las funciones de la Junta en el Portugal correspondían a las de una comisión reguladora de las importaciones (descritas en el documento sobre organización y política oficial). La Junta se encargaba de fijar las cuotas anuales de café que debían suministrar al Portugal los territorios de ultramar y las fuentes extranjeras; autorizar la exportación de café del Portugal; fijar los precios al consumidor de todo el café (según el grado y el tipo) en todo el territorio nacional, y reglamentar los precios del café en la industria y el comercio, en cooperación con el Gremio de Almacenistas y de Detallistas (Grémio dos Armazenistas e Retalhistas de Mercenarias).

37. En el Portugal, el café importado de los Territorios de Ultramar había de venderse en el mercado de productos de Lisboa conforme a las normas y a los precios mínimos fijados por la Junta. Únicamente a los miembros del Gremio de Almacenistas y Detallistas dedicados al café se les permitía comprar este producto en el mercado y venderlo al por menor. Sin embargo, si quedaba algo de café en el mercado de productos, se asignaba entre los detallistas, quienes tenían que aceptar cantidades en igual proporción que sus cuotas de venta anuales calculadas.

38. Casi todo el café que se consume en el Portugal se importa de los Territorios de Ultramar, entre los que Angola suministra más del 90% del total. Todos los años se fija la cuota de café que los exportadores angolanos han de enviar al Portugal. En el decenio 1940-1950 los exportadores tenían que reservar al Portugal el 25% de sus exportaciones de café, de cuya cifra el 50% tenía que ser café de primera clase, el 30% de segunda y el 20% de tercera. Desde 1955 y para aumentar las exportaciones de café de primera clase al extranjero, la cuota del Portugal se ha limitado principalmente a cafés de segunda y tercera. En 1958, por ejemplo, los exportadores tuvieron que entregar al Portugal el 5% de su cuota en forma de cafés de primera clase, 15% de segunda, y 25% de tercera.

39. Como en el caso de otros productos agrícolas de los Territorios de Ultramar (por ejemplo, el algodón), el precio del café angolano para el Portugal se fijó durante muchos años a un nivel bastante más bajo que el de los precios del mercado, y a menudo más bajo también que los precios F.O.B. de Angola para exportaciones a otros países. Por ejemplo, en 1954-1955, cuando los precios internacionales del café habían alcanzado un máximo nunca visto, el precio fijado en los mercados extranjeros al café Ambriz de primera clase era de 475 escudos por 15 kilos, y en cambio el precio en Lisboa era sólo de 300 escudos, lo que representaba un 10% menos que el precio F.O.B. en Angola, y 37% menos que el precio del mercado extranjero. En los últimos años, sin embargo, el café para consumo interior en el Portugal se ha vendido en el mercado de Lisboa con sujeción únicamente a un precio máximo.

¹ Nunes Barata, "Localização da Sede dos Organismos de Coordenação Económica no Ultramar", *Estudos de Ciências Políticas e Sociais*, No. 54, Lisboa, 1961, págs. 70 a 73.

40. Según las normas promulgadas en 1941 (Decreto 31.221, de 16 de abril), todos los productores europeos de café en los Territorios de Ultramar, así como los comerciantes (exportadores, reexportadores y consignadores) de cafés portugueses o coloniales, y también todas las empresas dedicadas a importar, distribuir y vender café al por mayor tenían que matricularse en la Junta de Exportación de Café. Los derechos de matrícula eran 1.000 escudos para el exportador; 2.500 para el productor-exportador; 250 para el productor que no fuese exportador, y 100 escudos para todos los demás dedicados al ramo detallista. Además de la Junta de Exportación propiamente dicha, únicamente a los productores y comerciantes europeos matriculados se les permitía exportar café de los territorios o importar café al Portugal. Sin embargo, la Junta podía, previa aprobación de los dos ministerios competentes (véase el párrafo 33), suspender temporalmente todas las exportaciones de empresas privadas y convertirse en único agente de estas actividades (Decreto-Ley 30.715, artículo 5).

41. Una de las tareas especiales de la Junta de Exportación de Café consistía en determinar oficialmente los sectores que debían reconocerse como tierras cafeeícolas africanas y matricular a los africanos que reuniesen los requisitos exigidos a los cultivadores africanos de café (véase párr. 32 anterior). En el decenio 1940-1950, la Junta estableció grupos especiales o *brigadas cafeeícolas*, que iban de pueblo en pueblo a contar los cafetos y matricular a los africanos que cultivasen una superficie mínima o tuviesen un mínimo de cafetos. Como norma, la Junta no reconocía como cultivadores de café a las personas que sólo cultivasen este producto en pequenísima escala y en parcelas muy separadas; se denominaba cultivador cafetero africano a toda persona a quien la Junta, por acuerdo, asignase una parcela de cierto tamaño, en la cual tenía que cultivar café y otros productos agrícolas aprobados en la medida necesaria para sustentarse. A todo cultivador de café reconocido se le entregaba una tarjeta en que se hacía constar su calidad de tal; esto le eximía del reclutamiento, le garantizaba la permanencia en la tierra y además le daba derecho a recibir de la Junta ayuda técnica y financiera.

42. Entre sus demás facultades, la Junta tenía la de poder ocupar cualquier tierra del Estado cuando ello fuese necesario para el desempeño de sus funciones, o con el fin de establecer granjas modelo. Además, cultivaba y distribuía cafetos, distribuía insecticidas y abonos y proporcionaba servicios de asesoramiento técnico a los cultivadores cafeteros.

43. Aunque la producción real y el comercio del café permanecía en manos de empresas privadas, el Gobierno controlaba de hecho, mediante la Junta de Exportación de Café Colonial, todas las actividades comerciales del café en los territorios. Todos los años la Junta fijaba los precios mínimos de exportación (F.O.B. en Angola y C.I.F. en Lisboa) para los distintos grados de café, habida cuenta de la producción nacional y extranjera, las necesidades del consumo interno y las circunstancias del mercado mundial.

44. Como norma, la Junta de Exportación de Café fijaba solamente los precios mínimos, y se permitía a los exportadores vender a países extranjeros a cualquier precio que pudiesen conseguir, siempre que no fuese inferior al mínimo. En la práctica, como los precios fijos de exportación de café suministrado al Portugal solían fijarse con descuento, era corriente que los exportadores tuviesen que conseguir un precio mejor que el mínimo establecido por la Junta para sus exportaciones al exterior, con objeto de compensar la diferencia.

45. Aparte de sus funciones reguladoras, la Junta de Exportación de Café Colonial asumía también las de junta de comercialización, con el fin de ayudar al productor. En 1960, época en que los precios mundiales del café bajaron mucho, la Junta creó un sistema de garantías en virtud del cual los cultivadores, aunque conservaban su derecho al café, recibían como pago hasta el 70% del valor de exportación del café que entregasen para su almacenamiento en depósitos especiales (Decreto 42.693, de 2 de diciembre de 1959; y Angola, Orden 11.305, de 3 de agosto de 1960). A tal fin, la Junta contrató un préstamo de 50 millones de escudos del Banco de Angola (Instrumento legislativo 3.057, de 17 de agosto de 1960). En 1961, después de so-

brevener el alzamiento en la parte septentrional de Angola, que afectó a casi toda la región de cultivo del café, y con objeto de proporcionar a los cultivadores cafeteros dinero en efectivo y garantizar la continuidad de las exportaciones, la Junta concertó un préstamo de 150 millones con dicho Banco para efectuar compras directas de café (Instrumento legislativo ministerial No. 1, abril de 1961). A fin de impedir que los exportadores vendiesen el producto a un precio inferior al mínimo oficial, se impusieron fuertes multas para este tipo de contravención. Se introdujeron medidas temporales, en virtud de las cuales los exportadores que no llenasen sus cuotas de exportación durante dos meses seguidos podían ser borrados del registro y podían, si no entregaban sus ganancias en moneda extranjera a la Junta de Divisas, perder dichas cuotas. Se creó un grupo consultivo de exportadores y productores locales, encargado de asesorar a la Junta en estas cuestiones, y la matrícula anual de nuevos exportadores se limitó a la mitad de las vacantes producidas por el retiro de cualesquier titulares.

46. En agosto de 1961, la Junta de Exportación de Café Colonial fue reemplazada por el Instituto del Café, con sede en Angola (Decretos 43.874 y 43.877, de 24 de agosto). El Instituto del Café, como el del Algodón, no es sino un órgano territorial y sus funciones no afectan la importación ni la venta del café en el Portugal, donde se ha creado un comité interministerial para coordinar la política general; este comité asume la responsabilidad de los controles en general y de los asuntos que atañen al Convenio Internacional del Café. El Comité se compone de un miembro que representa al Ministerio de Relaciones Exteriores, dos que representan al Secretario de Estado de Comercio, y un miembro que representa a la Junta de Investigaciones de Ultramar (Junta de Investigações do Ultramar). Le incumbe decidir la cantidad de café que ha de suministrarse al Portugal cada año, fijar los precios al consumidor del café de ultramar en Portugal, y fijar también los precios a la industria y al comercio.

47. Rigen el Instituto un Director y un Director Adjunto, nombrados por el Ministro de Ultramar y que han de haber cursado estudios superiores en las materias relacionadas con la labor del Instituto. Este dispone, además, de un Consejo General compuesto del Director, del Director Adjunto y de otros tres miembros que representan los intereses de los sectores productor y exportador y de los servicios económicos del Territorio.

48. Como órgano coordinador económico, el Instituto tiene la función de inspeccionar la producción de café con miras a mejorar su calidad y reglamentar la producción para atender las necesidades del desarrollo y equilibrio económicos. Le incumbe: a) regular el comercio y los precios del café dentro del Territorio para garantizar a los productores y comerciantes una justa parte de las ganancias y mantener el "equilibrio económico" del Territorio; b) proteger y fomentar el bienestar económico y social del pequeño productor y promover organizaciones como las cooperativas de productores; c) clasificar el café para la exportación, fijar los precios de exportación y asignar a cada exportador cuotas para los distintos grados de café; y d) suministrar semillas mejoradas, insecticidas, herramienta y demás servicios a los productores para aumentar la productividad.

49. Mientras que antaño sólo los productores europeos estaban matriculados en la Junta de Exportación de Café, con arreglo a las normas del Instituto del Café (Angola, Orden 13.112, 1º de febrero de 1964), hoy todos los productores cuyas explotaciones (*lastras*) rebasan una hectárea tienen que matricularse. Los derechos de matrícula para los cultivadores del café han sido rebajados: los titulares de una a cinco hectáreas no pagan nada; los que tienen de seis a diez hectáreas pagan 25 escudos; los que poseen de 11 a 20 hectáreas, 50; por encima de las 20 hectáreas la tarifa es de 250 escudos. Cada año, todos los cultivadores han de comunicar al Instituto su producción.

50. Todos los exportadores y comerciantes están obligados a inscribirse en el Instituto y a revalidar anualmente su situación. La tarifa de inscripción es de 1.000 escudos. Además del Instituto propiamente dicho, sólo los comerciantes y exportadores matriculados pueden dedicarse a estas actividades. En virtud de una nueva disposición, están exentas del pago de

los derechos de matrícula las cooperativas de productores y otros tipos de asociaciones de productores.

51. Con objeto de garantizar una calidad uniforme, todo el café destinado a la exportación tiene que pasar por los almacenes del Instituto, donde es examinado, se comprueba su categoría y se expide un certificado de exportación. Como antes, el Gobernador General, con asesoramiento del Instituto, fija precios mínimos de exportación para los distintos grados de café y los hace publicar periódicamente.

52. Los exportadores han de cumplir las normas y demás medidas fijadas por el Instituto; los infractores se exponen a una multa. Los comerciantes que exporten café a precios inferiores a los precios mínimos establecidos son multados con no menos de la mitad del valor total de la transacción correspondiente. La cuantía de la multa depende de la gravedad de la infracción y del efecto que ésta surta en los mercados interno y externo, del volumen de la transacción y de si el acto fue en provecho de intereses extranjeros o en perjuicio de la economía del Territorio.

Producción, exportaciones y destino de éstas

53. Si bien la producción de café en Angola ha ido aumentando constantemente en los 25 últimos años, desde 1955 ese aumento ha sido superior al de la producción mundial y, como resultado de ello, la parte de Angola en tal producción pasó, de 2,61% en 1955-1959, a 4,54% en 1963.

54. Tradicionalmente, la mayor parte del café producido en Angola se destina a la exportación. El volumen de exportación anual ha crecido con la producción: de un promedio de 22.463 toneladas en los años 1941-1945, subió a 78.546 toneladas en el período 1956-1960. Desde entonces las exportaciones han alcanzado casi al doble y su volumen en 1963 fue de 136.000 toneladas.

55. Desde los primeros años del decenio 1950-1960, los Estados Unidos de América han sido el principal comprador de café de Angola. Durante los diez últimos años, el promedio anual de compras de los Estados Unidos ha rebasado la mitad del total de las exportaciones, y en 1964 su importe se calculó en más de 50 millones de dólares de los Estados Unidos. Las compras de los Países Bajos oscilan entre 7% y 12% por término medio. En 1964, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y Bélgica y Luxemburgo absorbieron en conjunto el 12% aproximadamente (cuadro 4).

Papel económico del café

56. Antes de la segunda guerra mundial, más del 40% de las exportaciones visibles de Angola (en valor) se destinaban al Portugal, que a su vez suministraba la misma proporción de importaciones visibles del Territorio. En aquel tiempo, el azúcar, reservado casi totalmente al Portugal (véase más adelante la sección C), ocupaba en las exportaciones del Territorio el primer lugar en valor. Después de la guerra el café cobró mucho más importancia que todas las demás exportaciones y representó entre 35% y 40% del valor global, por término medio, de las exportaciones en el período 1956-1961, y casi el 50% en 1964 (véase el cuadro 18).

57. Al ganar importancia el café como producto principal de exportación se ha modificado el comercio exterior del Territorio, que ahora fuera del Portugal se orienta más hacia los Estados Unidos de América y otros países de Europa. En 1963, por ejemplo, el 22,3% en valor de las exportaciones de Angola se destinó al Portugal, el 47,4% a los países de Europa occidental y el 19,5% a los Estados Unidos. Así se ha convertido Angola en una fuente importante de divisas. Como la mayor parte de las divisas se retienen en el Portugal gracias al actual régimen de control de cambios, el café de Angola aporta una contribución esencial a la balanza de pagos del Portugal fuera de la zona del escudo.

58. En 1931 (Decreto 19.773), cuando se estableció el Fondo de Divisas, se debía pagar a éste el 75% del valor de las mercaderías exportadas a países extranjeros. El mismo reglamento se aplicaba a los bienes exportados al Portugal, pues la moneda local de Angola, que teóricamente estaba a la par con el escudo

metropolitano, no tenía (como ahora) libre convertibilidad. En 1932 (Decreto 20.694), se elevó la proporción al 90%. Aunque no hay detalles con respecto a las utilidades exactas en moneda extranjera derivadas del café, de los datos publicados en 1960 se desprende que entre 1948 y 1957 las exportaciones de Angola ascendieron a 27 millones de *contos*, de cuya suma se pagó al Fondo de Divisas¹ una cantidad equivalente a 18.300.000 *contos* (600 millones de dólares de los Estados Unidos).

59. Fuera de los derechos ordinarios de exportación², el café ha estado también sujeto algunas veces a diversos impuestos. Desde 1936 (Decreto 27.294, de 30 de noviembre) se aplica un derecho del 1,5% *ad valorem* sobre el café destinado al Fondo de Desarrollo de Angola, y después de 1952 el café fue objeto de un impuesto (*imposto de sobrevalorização*) basado en el aumento del valor con respecto al nivel de 1949. El Consejo Técnico Aduanero fija mensualmente el impuesto, que varía según los precios mundiales; varía también según el destino del producto. En julio de 1960, por ejemplo, el impuesto especial (*imposto de sobrevalorização*) respecto de 15 kilogramos de café *arabica* de primera clase, con destino al extranjero, fue de 36 escudos, de 54,70 escudos si se exportaba a otros Territorios y de 34,5 escudos cuando se exportaba a Portugal. Con respecto al café tipo *robusta* de Cazengo el impuesto fue de 8,8 escudos, 20,60 escudos y 6,5 escudos, respectivamente.

60. En 1957 (Orden 16.396, de 2 de septiembre de 1957) el recargo sobre las exportaciones de café se alteró con el fin de estimular una mayor exportación de los cafés de primera calidad. Las nuevas tasas establecidas fueron de 9,5% *ad valorem* para el café de primera clase; del 11,5% para el café de segunda clase, y del 15,5% para el café de tercera clase y los cafés para uso industrial. Hubo además un recargo de 10 centavos por kilogramo percibidos sobre el café de todos los tipos, que se destinó a un Fondo especial de Propagación del Café.

61. A raíz de la creación del Instituto del Café, se cambió el nombre de Fondo de Propagación del Café al de Fondo de Desarrollo y Propagación del Café y, para dotar a éste de más ingresos, se le sometió al Instituto. Las aduanas pagaron 20 centavos por cada kilogramo de café de tercera clase exportado (Orden 18.729, de 15 de septiembre de 1961).

62. En 1962 (Instrumento legislativo 3.326, de 31 de diciembre de 1962) se cobraron otros 25 centavos de impuesto por kilogramo sobre el café para dotar de ingresos a la Corporación de defensa civil y de voluntarios. Dada la continua baja de los precios del café, en 1963 (Instrumento legislativo 3.334, de 26 de enero de 1963), a todo el café inferior al de primera y segunda clase se le eximió del recargo, así como del 1,5% del impuesto del Fondo de Desarrollo y de los 10 centavos del Impuesto del Fondo de Propagación del Café. Sin embargo, en 1963 el ingreso procedente de los impuestos especiales sobre el café (excluidos los derechos normales de importación) ascendió a más de 100 millones de escudos (2.500.000 dólares de los Estados Unidos), que incluían 14.400.000 escudos procedentes del recargo de 10 centavos, 27 millones de escudos del impuesto especial de 1,5% *ad valorem*, y 21.400.000 escudos del impuesto de *sobrevalorização*, y más de 30 millones de escudos procedentes del impuesto de 25 centavos para la mencionada Corporación de defensa civil y de voluntarios. Cuando los precios del café alcanzaron su punto álgido a mediados del decenio de 1950, el ingreso territorial procedente del impuesto de *sobrevalorização* solamente alcanzó un promedio de unos 80 millones de escudos anuales.

63. Parte de los ingresos procedentes del café se utilizan para sufragar los gastos ordinarios de operación del órgano regulador. En 1965 el Instituto del Café de Angola tuvo un presupuesto total de 635 millones de escudos. De esta cantidad, su ingreso ordinario representaba 52.400.000 escudos, incluidos 4.400.000 del año presupuestario anterior, 1 millón de escudos

procedente del reembolso aduanero de 20 centavos por kilogramo de café de tercera clase y 12 millones de escudos de otros gravámenes legales sobre el café. Entre los ingresos extraordinarios por un total de 583 millones de escudos figuran 300 millones de escudos procedentes de las ventas de café, un préstamo de 200 millones de escudos y garantías de café por un valor de 80 millones de escudos.

64. Más que cualquier otro elemento tomado separadamente, el café, considerado como nueva fuente de riqueza, ha traído creciente número de colonizadores portugueses a Angola. Las cifras censales demuestran que durante el decenio 1950-1960 la población europea aumentó en más de 100.000 habitantes. En el distrito de Uíge creció en un 569%, en Cuanza septentrional en 230%, en Cuanza meridional en 211% y en Benguela en 119%. De 1956 a 1962 el número de cultivadores de café aumentó de 638 a más de 2.000. Lo que es más importante, como ya se ha señalado (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II), durante este período se concedieron grandes extensiones de tierras a empresas no africanas en las regiones principales de explotación del café: 157.000 hectáreas en Cuanza septentrional, 113.000 en Cuanza meridional y 146.000 en el antiguo distrito del Congo. En el distrito del Luanda se otorgaron asimismo más de 100.000 hectáreas de concesiones. Algunas de las nuevas colonias patrocinadas por el Gobierno están basadas en el café como principal cultivo comercial. Entre dichas colonias figuran la del valle de Loge, Banga (con colonizadores procedentes de Cabo Verde) y Bolongongo. Como se verá más adelante, gracias al café los colonos portugueses de Angola pueden ganar mayores ingresos que un agricultor común de Portugal. El café ha contribuido también a las utilidades de los propietarios agrícolas ausentes y de los accionistas de las compañías cafeteras. Se dice que las utilidades del café han contribuido, por ejemplo, al desarrollo de la propiedad raíz en Lisboa, incluso a gran parte de las construcciones realizadas a lo largo de la Avenida de Roma, una de las arterias modernas de la ciudad³.

65. Existen varios cálculos con respecto al ingreso medio procedente del café. En 1957 el ingreso neto por acre producido en condiciones normales por el café cultivado en el norte fue de 30 dólares de los EE. UU. por acre, o sea 75 dólares por hectárea al precio de 1957⁴. Un estudio de Portugal publicado en 1957⁵ citaba dos diferentes cálculos del costo de producción por kilogramo de café. Suponiendo un costo de capital de 2.830 escudos por hectárea, con un promedio de producción anual de 300 kilogramos, el costo por kilogramo resultó ser de 10,32 escudos distribuidos en la forma siguiente: 4 escudos por mano de obra, 32 centavos por descascarado y preparación del café, 30 centavos por empaque y rotulado, 4,85 escudos por sueldos del personal europeo y 85 centavos por concepto de interés sobre el capital. En este cálculo el 80% del costo corresponde a la mano de obra y probablemente parte de ello toca al propietario agrícola europeo mismo. El otro cálculo llegó a un costo en la propiedad agrícola de 8,4 escudos por kilogramo basado en un costo de operación anual estimado en 2.778 escudos por hectárea.

66. Con el fin de calcular el ingreso para el productor o el exportador o para ambos a la vez, es necesario agregar los costos adicionales anteriores a la exportación. Tomando como base el cálculo más bajo de costos en la propiedad agrícola y agregando el costo de transporte de 60 centavos por kilogramo, la tarifa de exportación de 15,04% *ad valorem* sobre el valor del mercado y gravámenes adicionales que suman 60 centavos por kilogramo, el costo F.O.B. Angola por kilogramo ascendió a 15 escudos. Al precio medio F.O.B. de 1957, de 19,7 escudos por kilogramo, la utilidad neta habría sido de 5 escudos por kilogramo o sea 2.000 escudos por hectárea. Para el propieta-

¹ Irene S. Donegan, "Coffee Trade, Coffee Regions and Coffee Ports in Angola", *Economic Geography*, vol. 37, No. 4 (octubre de 1961), pág. 36.

² *Ibid.* Información proporcionada por el jefe de la Granja Experimental (de Carmona) de la Junta de Exportación de Café Colonial.

³ "Aspectos económicos da cafeicultura angolana", *Revista Portuguesa do Café*, No. 13 (marzo de 1957), citado en la obra de Alfredo de Souza, "Ensaio de análise económica do café", *Estudos de Ciências Políticas e Sociais*, No. 17, 1960.

⁴ "A Questão Cambial", *Actividade Económica de Angola*, enero/agosto 1961, pág. 85.

⁵ En 1956 la tarifa normal de exportación era del 1% *ad valorem* más el 11,5% *ad valorem* de recargo por el café exportado a puertos extranjeros; en cuanto al café exportado al Portugal, el derecho normal era del 8% *ad valorem*.

rio agrícola medio europeo titular de 100 hectáreas por lo menos, el ingreso neto fue de 200.000 escudos, o aproximadamente de 7.000 dólares de los Estados Unidos.

67. En 1964 el precio medio de exportación por tonelada de café fue de 20.600 escudos, de modo que en las propiedades agrícolas europeas que producen un promedio de 400 kilogramos por hectárea, el ingreso bruto por hectárea fue de 8.000 escudos, o sea, aproximadamente de 280 dólares de los EE. UU. Un agricultor europeo medio titular de 100 hectáreas de café en cultivo tendría por lo tanto un ingreso bruto anual de 28.000 dólares de los EE. UU. Como se señaló anteriormente, en 1963 casi las tres cuartas partes de los cafetales europeos tenían 100 hectáreas o más en cultivo. Al precio medio de exportación de 20.600 escudos, para una compañía tal como la CADA, que exporta 10.000 toneladas, el ingreso bruto del café solamente pasaría de 200 millones de escudos, o sea unos 65 millones de dólares. Las utilidades netas de todas las operaciones de CADA en 1964 ascendieron a 39.600.000 escudos y los dividendos pagados a 28.500.000 escudos.

68. Según las cifras publicadas en 1965, en el valle de Loge cada una de las familias de los colonos tuvo un ingreso de 40.000 escudos procedente del café únicamente y en Balongongo, de 20.000 escudos^o.

69. Para los africanos el café ha abierto una nueva — aunque no ilimitada — fuente de ingresos, pues aun bajo la nueva legislación de concesión de tierras (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II), los africanos que viven en las *regedorias* no pueden poseer tierras en las mismas condiciones que los europeos, ni tampoco, por lo general, exportar sus propios productos^p, sino que tienen que venderlos a los exportadores comerciales en mercados rurales supervisados. Según una fuente informativa portuguesa en 1965 el ingreso medio bruto de los cultivadores de café africanos fue de 5.000 escudos por hectárea, cuando el precio pagado fue de 10 escudos por kilogramo^q. Esta cifra parece alta pues la mayor parte de los escritores portugueses calculan que los africanos producen un promedio de 350 kilogramos de café por hectárea, y el precio que perciben por él depende de la calidad, el volumen y la categoría del café en grano comercializado y del precio pagado por los exportadores comerciales.

^o *Actualidade Económica de Angola*, 7 de octubre de 1965.

^p Esto se debe a que los africanos no pueden, como regla general, reunir los requisitos para inscribirse como exportadores. Además, en su mayoría, no producen más de una tonelada de café, mientras que en la estación de 1965-1966, por ejemplo, el Instituto del Café decidió conceder cuotas de exportación sólo a los cultivadores cuyas entregas pudieran pasar de 150 toneladas, o 2.500 sacos.

^q *Boletim Geral do Ultramar*, junio de 1965, pág. 219.

Acontecimientos recientes

70. Portugal es parte en el Convenio Internacional del Café desde 1958. En dicho Convenio participan 32 países exportadores que representan el 95% de la producción mundial de café tipo *robusta*, y 22 importadores que cubren el 94% del consumo mundial. La cuota básica total mundial está fijada en 45.898.183 sacos^r (2.850.000 toneladas) y la cuota básica de Angola es de 4,77%, esto es 2.188.648 sacos. Como país en desarrollo, desde 1962 la cuota de Angola ha aumentado levemente cada año, elevándose de 1.904.678 sacos en 1961-1962, a 2.045.213 sacos en 1964-1965 y a 2.064.127 en 1965-1966. Salvo el año pasado, las exportaciones de Angola a los mercados tradicionales han excedido su cuota y al mismo tiempo se han vendido otras cantidades en mercados "nuevos", esto es, mercados no cubiertos por el Convenio, que aún tienen potencial de expansión. En 1965, por ejemplo, Portugal concertó un acuerdo con Sudáfrica por el que se aumentan las exportaciones de café angolano de 300 a 3.500 toneladas anuales para reemplazar el café tipo *robusta* que Sudáfrica importaba antes de Uganda.

71. Según una información reciente, se espera que en el período 1966-1967 la producción de Angola sea de 3.100.000 sacos. Como su cuota es de 2.214.000 sacos, después de deducir su propio consumo (50.000 sacos), sus exportaciones al Portugal (300.000 sacos) y las exportaciones a los demás Territorios de Ultramar (10.000 sacos)^s tendrá un excedente de 526.000 sacos. Para hacer frente al excedente, previsto, en enero de 1966 el Gobierno dictó medidas (Instrumento legislativo 3.606) que prevén ciertas rebajas arancelarias con respecto al café de segunda clase y al café no especificado exportado a mercados nuevos. El continuo aumento de la producción ha dado también nuevo ímpetu al establecimiento de una industria de café soluble. Se informó que la Sociedade Comercial e Agrícola Maria Celeste, autorizada en 1963 a fundar una fábrica de café soluble con capacidad para elaborar 10.000 toneladas anuales de café en cereza (equivalentes a una producción de 2.740 toneladas de café soluble), estaba tratando de atraer inversiones de las compañías cafeteras de los Estados Unidos en 1965.

72. Si bien el café ha llevado un aumento de prosperidad al Territorio, ha creado también problemas. Uno de los más graves resultados del exceso de concentración en el café ha sido la merma de la producción de importantes cultivos alimenticios a los cuales se dedicaban tradicionalmente los africanos. En 1965 se implantaron algunas medidas con el fin de estimular el aumento de la producción del sector tradicional y a principios de 1966 (Instrumento legislativo 3.623, de 7 de febrero) el Gobierno decidió prohibir la plantación de nuevas tierras con café *robusta*.

^r De 60 kilogramos cada uno.

^s Como Portugal es parte en el Convenio Internacional del Café, su propio consumo y las exportaciones a los demás Territorios bajo administración del Portugal no se descuentan de la cuota de Angola.

CUADRO 2

ANGOLA: PRODUCCIÓN DE CAFÉ

Año	Número de cultivadores europeos	Número de autóctonos empleados por europeos	Superficie total cultivada	Producción				
				Cantidad		Distribución		
				Total	(Toneladas) Europeos	Africanos	Porcentaje de europeos	Porcentaje de africanos
1954 ...	418	44.773	258.047	44.723	30.971	13.752	69,25	30,75
1955 ...	597	54.583	197.517	68.565	49.640	18.925	72,40	27,60
1956 ...	638	85.467	251.671	84.893	63.200	21.693	74,45	25,55
1957 ...	1.490	90.883	255.646	78.016	58.080	19.936	74,45	25,55
1958 ...	1.679	86.360	257.962	87.993	65.772	22.221	74,45	25,55
1959 ...	2.012	89.545	266.185	97.307
1960	90.000	378.050	160.552
1961	90.000	420.003	168.558

Fuente: Angola, *Anuário Estatístico*, 1954-1962. El volumen de 1962 repite los datos correspondientes a 1959.

CUADRO 3

ANGOLA: AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS, 1955 Y 1960

	1955				1960			
	Superficie (Hectáreas)	(%)	Rendimiento (Toneladas)	(%)	Superficie (Hectáreas)	(%)	Rendimiento (Toneladas)	(%)
Total del Territorio	197.517	100	68.565	100	378.050	100	160.000	100
Uíge*	57.143	29	20.000	29	93.682	25	30.800	19
Cuanza septentrional	91.428	46	32.000	47	128.148	34	50.100	31
Cuanza meridional	40.043	20	14.000	20	125.272	33	74.600	47
Total de los tres distritos	188.614	95	66.000	96	347.122	92	155.500	97

* Los datos de 1955 corresponden al distrito del Congo, compuesto a la sazón de los actuales distritos de Uíge y de Zaire.

CUADRO 4

ANGOLA — CAFÉ: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES DESTINOS DE ÉSTAS, 1955-1964

Año	Exportaciones totales			Destinos						
	En miles de toneladas	En millones de escudos	Porcentaje de las exportaciones totales	Portugal		Estados Unidos %	Países Bajos %	República Federal de Alemania %	Bélgica-Luxemburgo %	Reino Unido %
				Toneladas	%					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1955	37,0	856	30,50	3.282	8,88	67,07	14,56	1,43	1,13	1,31
1956	66,5	1.243	37,78	4.452	6,69	45,92	20,42	1,69	2,94	0,40
1957	72,2	1.421	42,24	7.164	9,92	58,95	17,85	1,51	2,48	0,54
1958	77,3	1.506	40,82	13.073	16,91	52,55	20,23	0,97	2,22	1,57
1959	89,0	1.388	38,68	9.170	10,91	59,66	20,24	1,65	1,98	0,90
1960	87,2	1.264	35,45	12.200	13,99	52,19	21,16	2,09	1,71	0,82
1961	118,1	1.399	36,10	13.882	11,75	55,54	23,35	2,69	1,75	0,30
1962	156,9	1.864	43,71	11.997	7,65	54,67	20,45	3,68	3,06	1,65
1963	136,4	1.895	40,45	14.485	10,62	44,33	25,66	4,71	4,75	1,07
1964	138,7	2.859	48,73	8.682	6,26	52,97	21,53	3,45	2,51	6,06

Fuentes: Todos los datos que se refieren al período 1955-1963, salvo la columna (3): Angola: *Comércio Externo*. Columna (3) y 1964: Banco de Angola: *Relatório e Contas* (1961 y 1964).

B. Sisal

Generalidades

73. El sisal es uno de los dos cultivos de exportación más valiosos de Angola. Empezó a adquirir importancia alrededor de 1929, cuando el volumen de exportación era de 569 toneladas en total. La producción aumentó durante el decenio de 1930 y a principios del decenio de 1940 las exportaciones anuales ascendieron a unas 4.000 toneladas. La producción ha ido creciendo rápidamente desde 1944 y el sisal que solía clasificarse después del maíz, el azúcar, el café y el frijol, ocupa actualmente el segundo lugar entre los cultivos de exportación del Territorio. En 1963 Angola fue el cuarto productor mundial de sisal y sus exportaciones alcanzaron un volumen de 62.000 toneladas aproximadamente, a un valor de 476 millones de escudos, o sea más o menos el 12% del total de las exportaciones visibles del Territorio. En 1965 le correspondió el tercer lugar entre los productores mundiales, siguiendo a Tanzania y Brasil.

74. Las principales zonas de plantación del sisal se encuentran en la meseta de Benguela, y especialmente en Ganda y Cubal, a lo largo del ferrocarril de Benguela. El sisal se cultiva también cerca del curso inferior del río Catumbela, en el *concelho* de Bocóio, en Quibala y Gabela, así como en Libolo y Calulo, en el distrito de Cuanza meridional. Entre el 60% y 75% de la producción total procede del distrito de Benguela.

75. La planta de sisal (*agave sisalana perrine*) tiene una duración media de ocho años más o menos. Si bien hay años en que la superficie cultivada da un rendimiento de cerca de 80% las cosechas suelen ser inferiores. La planta de sisal produce unas 50 hojas; cada una pesa aproximadamente un kilo y contiene un 3% de fibra. El rendimiento de fibra en los principales países productores es de más o menos una tonelada por hectárea, pero en Angola, por falta de una replantación adecuada, el promedio ha sido, hasta hace muy poco, menos de la mitad de una tonelada por hectárea. Además de la fibra, se obtienen la estopa y los residuos de sisal que también se exportan.

Organización de la producción

76. En Angola se cultiva el sisal exclusivamente en plantaciones de propiedad europea que exigen una considerable inversión en equipo, incluso para el transporte del sisal hasta la fábrica. A partir de 1930 los principales responsables del desarrollo de la industria del sisal eran sociedades británicas y alemanas. En el período 1949-1953, cuando estaban altos los precios mundiales, los cultivadores de sisal disfrutaron de cierta prosperidad y pudieron saldar sus deudas e invertir las utilidades en equipo nuevo y obras de expansión. Sin embargo, en 1957, cuando los precios del sisal bajaron a 4,09 escudos por kilogramo, del alto precio de 14,51 escudos por kilogramo alcanzado en 1951, la mayor parte de las plantaciones de sisal volvieron a trabajar con pérdidas.

77. En 1960 cerca de 170 cultivadores de sisal explotaban unas 100.500 hectáreas, de las cuales 51.307 eran productivas. Se calcula que el total de inversiones en las plantaciones y plantas de descascarado pasaba de 1.000 millones de escudos (Orden 10.058, Angola, *Boletim Oficial*, de 2 de enero de 1958); aproximadamente la mitad de esta suma correspondía a inversiones en el distrito de Angola solamente. Alrededor del 47% de los cultivadores de sisal están concentrados en el *concelho* de Ganda y disponen del 57% de la superficie total en explotación. El resto de los productores de sisal se divide así: 11 en el distrito de Huíla, 12 en Bié, 8 en Zaire y Uíge (antiguo distrito del Congo) y 10 en Malanje, y la extensión de las plantaciones fluctúa entre 100 y 2.000 hectáreas. En 1965 había 200 cultivadores, titulares de 125.000 hectáreas de plantaciones de sisal en las que se empleaban a unos 25.000 trabajadores.

78. Poco se sabe de las diversas compañías productoras de sisal. Entre las grandes compañías agrícolas que tienen también plantaciones de sisal figuran a) Sociedade Agrícola do Cassequel con más o menos 7.500 hectáreas; b) Companhia do Açúcar de Angola S.A.R.L. (CAA) con 7.000 hectáreas; y c) Empresa Agro-Industrial de Angola (EMANGOLA).

79. Hasta 1965 el único tratamiento de sisal del Territorio consistía en el secado y descascarado. En Angola se considera por lo general una zona de 500 hectáreas como unidad económica mínima para esa finalidad y la mayor parte de las plantaciones disponen de instalaciones industriales. Los productores que no las poseen venden su sisal a otros para su elaboración. El número de industrias de descascarado aumentó de 69 en 1955 a 115 en 1961, y la cantidad de capital invertido en tales industrias pasó de 71.900.000 a 150.600.000 escudos. Más o menos el 70% de las industrias están ubicadas en el distrito de Benguela. En 1959 había 4 en Luanda, 5 en Cuanza septentrional, 11 en Cuanza meridional, 3 en Malanje, 70 en Benguela, 4 en Huíla, y las localidades de Bié, Moxico y Huambo tenían cada una la suya. Sin embargo se carece de informes sobre la nacionalidad de los propietarios.

80. Las empresas de elaboración varían de tamaño, la capacidad de la mayor parte fluctúa entre 300 kilogramos a cuatro toneladas de producción por ocho horas de trabajo. Las centrales más grandes ocupan por lo general entre 50 y 100 africanos además de varios europeos. El capital social de estas compañías oscila entre 500.000 y 3 ó 4 millones de escudos.

Reglamentos y fiscalización oficiales

81. Salvo las medidas reguladoras de los precios F.O.B., derechos de exportación y otros impuestos, no había en el pasado medidas especiales para el control de la producción y exportación de sisal. Aunque los precios oficiales de exportación F.O.B. han seguido por lo general las tendencias del mercado mundial, no se han implantado medidas de estabilización.

82. Las exportaciones de sisal están sujetas a: a) un derecho de exportación normal de 1% *ad valorem*; b) un recargo del 5% *ad valorem* en virtud de las disposiciones de 1948 (Decreto 37.214 de diciembre); y c) un impuesto especial de 5 centavos por kilogramo para el fondo de desarrollo establecido en 1936 (Decreto 24.294, de 30 de noviembre de 1936). A diferencia de las grandes compañías mineras, que disfrutaban de privilegios tributarios, las plantaciones y centrales de elaboración de sisal

pagan también el *imposto sobre explorações*^{*} y un impuesto complementario sobre la renta (*imposto complementar*).

83. El efecto combinado de estos tres gravámenes en las exportaciones es una carga tributaria sobre los productores de sisal que guarda proporción inversa al precio de importación: asciende al 7% a un precio de 5 escudos por kilogramo, al 6,7% a un precio de 7 escudos por kilogramo y al 6,5% a un precio de 10 escudos por kilogramo. Su fin, en tiempos normales, es estimular la producción para la exportación de las mejores calidades del producto (como en el caso descrito más arriba de los aranceles cafeteros revisados). Sin embargo, el sistema se complica por el hecho de que los gravámenes de exportación sobre el sisal se basan en un valor aduanero oficial (*valores aduaneiros*) fijado mensualmente por las autoridades aduaneras, mientras que los precios efectivos F.O.B. son fijados por la Junta de Comercio Exterior y revisados con intervalos de pocos días para seguir el ritmo de las condiciones del mercado mundial. Cuando la baja de los precios F.O.B. hace que éstos sean inferiores al valor de exportación fijado mensualmente, los gravámenes de exportación resultan más altos de lo que justifican los precios del mercado; por lo contrario, cuando el alza de los precios F.O.B. les hace pasar del valor de exportación, esto beneficia a los exportadores. De modo que todo el sistema castiga al productor cuando el mercado es desfavorable en vez de ayudarlo.

84. La fluctuación de los precios mundiales del sisal ha obligado al Gobierno a ajustar varias veces los gravámenes de exportación sobre el sisal para aliviar la situación de productores y exportadores. En 1953, por ejemplo, los distintos gravámenes sobre el sisal se ajustaron en forma que proporcionarían el mayor beneficio al sisal exportado a un precio inferior a 5 escudos por kilogramo eximiéndolo absolutamente de todo gravamen (Decreto 39.409, de 30 de octubre). A este precio, la exención tributaria ascendió a 350 escudos por tonelada. Cuando los precios del sisal fluctuaban entre 5 y 6 escudos, se eximía a los exportadores del impuesto especial de desarrollo de 5 centavos por kilogramo. De este modo, a un precio de 6 escudos por kilogramo, un exportador pagaba solamente el 1% de derecho de exportación *ad valorem*. A los precios superiores a 6 pero que no pasaban de 7 escudos, el exportador pagaba el 1% *ad valorem*, el impuesto de 5 centavos, y el recargo *ad valorem* en escala móvil. El efecto de todo esto fue que al precio de 7 escudos por kilogramo un exportador se beneficiaba de una rebaja tributaria de 70 escudos del total de 470 escudos por tonelada que de otro modo hubiera tenido que pagar.

85. En 1955 estas medidas fueron insuficientes y todos los gravámenes de exportación sobre el sisal tanto de Angola como de Mozambique se suspendieron hasta que mejorasen los precios (Decreto 40.104, de 24 de marzo). En 1958, como medida especial se disminuyó en Angola en un 75% el *imposto sobre explorações* y el impuesto complementario sobre renta del sisal.

Sisal: promedio de precios f.o.b. de las exportaciones

Año	Precio	Año	Precio
1950	8,96	1958	4,13
1951	14,51	1959	5,40
1952	10,87	1960	6,48
1953	5,83	1961	5,36
1954	5,36	1962	5,91
1955	4,79	1963	9,21
1956	4,90	1964	8,32
1957	4,09	1965	5,0-5,25

86. En 1961 (Decreto 43.566, 28 de marzo) se revisaron nuevamente los gravámenes sobre el sisal; se suspendió el im-

^{*} Véase la nota *h supra*.

puesto de 5 centavos para el fondo de desarrollo, se concedieron varias exenciones para los precios inferiores a 7,40 escudos y, como antes, el sisal exportado a menos de 5 escudos por kilogramo siguió exento de todo derecho de impuesto. Sin embargo, en 1962 (Instrumento legislativo 3.326, de 31 de diciembre de 1962) se gravaron con un impuesto especial de 15 centavos por kilogramo las exportaciones de sisal a fin de dotar de ingresos la nueva corporación de defensa civil y de voluntarios. Se ha calculado que sobre 100 toneladas de sisal de tercera clase exportado a 5,15 escudos por kilogramo, los derechos de exportación fueron de 5.900 escudos, y el impuesto de defensa de 15.000 escudos. A los precios de 1965, un productor de sisal que exportara 1.500 toneladas tenía que pagar 225.000 escudos en impuesto de defensa para la mencionada corporación de defensa y si sus utilidades pasaban de un millón de escudos, tenía que pagar otros 32.000 escudos en virtud del impuesto de defensa por exceso de utilidades de las compañías (véase cap. V, párr. 104). Con un rendimiento medio de 400 kilogramos por hectárea, se calculó que los ingresos netos del sisal fluctuaban entre el 15% y 30% de los costos, o sea, ascendían a un promedio de unos 660 escudos (23.000 dólares de los Estados Unidos) por tonelada, después de pagados todos los impuestos y derechos. El ingreso neto por tonelada para los productores sujetos al impuesto por exceso de beneficios fue de 20 escudos menos.

87. En noviembre de 1965 se suprimió el impuesto de defensa de 15 centavos sobre el sisal y se hicieron nuevos ajustes en los gravámenes de exportación con arreglo a las mismas normas aplicadas en las medidas de 1953 descritas más arriba; además se elevó a 6 escudos el precio al cual el sisal quedaba exento de todos los gravámenes de exportación.

Producción, exportaciones y consumo local

88. Entre 1940 y 1950 las exportaciones de sisal aumentaron de 4.358 toneladas a 20.644. En los cinco años siguientes las exportaciones se duplicaron y casi alcanzaron en 1960 el volumen de 58.000 toneladas, lo que representaba el 15,4% de la producción de sisal de África, y el 7,4% de la producción mundial. En 1962 las exportaciones aumentaron a 69.000 toneladas, pero desde entonces han disminuido: en 1964 sólo llegaron a 58.000 toneladas (véase el cuadro 5).

89. Hasta hace muy poco se exportaba casi la totalidad de fibra, estopa y desperdicios del sisal. En el decenio de 1940 los Estados Unidos, Francia y Bélgica eran los clientes principales, pero desde mediados del decenio de 1950 los reemplazó el Portugal que, en 1964, recibió casi 29.000 toneladas de sisal o sea más o menos la mitad de las exportaciones totales. A los Países Bajos correspondió el segundo lugar en 1964; este cliente absorbió el 13,4% de esas exportaciones (véase el cuadro 5).

90. La demanda de sisal ha crecido desde 1964 como consecuencia de nuevos usos, entre ellos el empaquetado del heno en atados en vez de almacenamiento en masa. En 1965 se creó en el distrito de Benguela la fábrica CONFIANG de cuerdas de sisal (Companhia de Fiação e Cordoaria de Angola, S.A.R.L.), por iniciativa de 15 productores de sisal. La compañía tiene un capital social inicial de 30 millones de escudos y está autorizada a aumentarlo hasta 60 millones de escudos. Se espera que la empresa emplee a unas 500 personas y fabrique varios tipos de cuerdas industriales por un total de 3 millones de contos, y que la sección cuerdas de sisal absorba el 30% de la producción total de sisal del distrito, y hasta el 50% dentro de dos años.

CUADRO 5

ANGOLA — SISAL: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES DESTINOS, 1955-1964

Año	Exportaciones			Principales destinos						
	En miles de toneladas	En millones de escudos	Porcentaje del valor de exportación total	Portugal		República Federal de Alemania %	Bélgica-Luxemburgo %	Estados Unidos %	Francia %	Países Bajos %
				Toneladas	%					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1955	40,7	195,2	6,96	3.712	9,12	16,01	7,92	4,16	27,57	9,50
1956	37,3	182,6	5,55	6.677	17,90	7,82	4,95	1,46	37,14	7,56
1957	46,4	190,0	5,65	7.917	17,06	10,31	2,91	7,54	35,56	3,51
1958	51,9	214,0	5,80	10.927	21,05	11,82	2,40	4,25	38,04	3,85
1959	53,5	289,6	8,07	13.186	24,65	8,91	2,65	8,50	22,48	4,01
1960	57,9	375,5	10,53	21.000	36,27	6,76	1,86	1,32	13,71	5,16
1961	58,9	316,1	8,16	21.122	35,86	4,67	1,57	7,88	6,90	6,28
1962	68,9	408,3	9,58	37.249	54,06	3,04	1,23	2,00	4,36	5,81
1963	62,0	577,5	12,33	25.526	41,17	...	3,46	...	9,97	15,27
1964	57,2	479,1	8,17	28.660	50,11	...	4,57	...	4,80	13,62

Fuentes: Las cifras correspondientes a 1963 y 1964 proceden del Banco de Angola: *Relatório de Contas*, 1964. Todos los demás datos de Angola: *Anuário Estatístico*, 1962.

C. Azúcar

Generalidades

91. El azúcar se introdujo en Angola durante el siglo XVI, proveniente de Irán y de China. Hasta fines del siglo XIX su cultivo en el Territorio tuvo como principal objeto la producción de alcohol. A comienzos del siglo XX se hicieron nuevas inversiones, de fuentes portuguesas y extranjeras, en las plantaciones de azúcar de Angola, después de que se concediera trato preferencial y que se garantizara un mercado en Portugal al azúcar de los Territorios de Ultramar.

92. A partir de 1930 la producción azucarera de Angola aumentó con mayor rapidez, y se elevó de 11.000 toneladas a 52.000 toneladas en 1945. Durante este período Angola suministró alrededor del 50% del azúcar consumida en Portugal; el azúcar se convirtió en uno de los principales productos de exportación del territorio, y constituyó alrededor de la octava parte del valor total de las exportaciones. Aunque entre 1945 y 1955 la producción de azúcar de Angola siguió siendo de unas 50.000 toneladas anuales, en los últimos años ha ido aumentando gradualmente. No obstante, el azúcar ya no es una exportación importante. En 1963 constituyó menos del 2% del valor total de

las exportaciones visibles; de las 68.000 toneladas de azúcar producidas en Angola, se retuvieron 42.000 toneladas para el consumo interno, y sólo se enviaron a Portugal 18.000 toneladas, lo cual constituye aproximadamente el 20% del consumo de azúcar de este país.

93. La caña de azúcar cultivada en Angola es en su mayor parte un tipo híbrido de la variedad Java. Las principales plantaciones de azúcar están situadas en las riberas del río Dande cerca de Caixito, en el río Cuanza cerca de Catete, en la región de Quissol (Malanje meridional), en los ríos Catumbela y Cavaco y en el río Coporola en Benguela.

Organización de la producción

94. En Angola se cultiva azúcar tan sólo en plantaciones que son propiedad de las empresas productoras. Como se requiere considerable capital, la producción ha permanecido, en su mayor parte, en manos de tres empresas de actividades múltiples que son de propiedad europea: la Companhia do Açúcar de Angola, la Sociedade Agrícola de Cassequel y la Sociedade de Comércio e Construções. En Quissol existe una pequeña fábrica de azúcar que tiene sus propias plantaciones. En 1958 se concedió licencia para establecer otra fábrica de azúcar y plantaciones en Cuanza meridional pero la empresa nunca inició sus operaciones.

95. La extensión de las plantaciones de azúcar, que abarcaban casi 11.000 hectáreas en 1953 (de las cuales 8.700 hectáreas se hallaban en plena producción) no ha aumentado en el curso del último decenio. Se informa que la falta de capital y de mano de obra ha limitado la expansión, por lo que las compañías se han dedicado preferentemente a aumentar los rendimientos. En 1960-1961 la producción media de azúcar era de unas 85 toneladas de caña por hectárea, con un rendimiento de 5,8 toneladas/hectárea de azúcar. Se considera que estos rendimientos son bajos en comparación con la producción media lograda hace algunos años en Java, que fue de 120 toneladas de caña por hectárea. Algunos expertos de Angola consideran que no podrá obtenerse en el país un rendimiento más alto si se sigue utilizando el actual sistema de plantaciones espaciadas y si no se emplean abonos.

96. Se informa que en 1962 la inversión en fábricas y plantaciones de azúcar fue de 500 millones de escudos, de los cuales 290 millones se destinaron a cinco fábricas de azúcar y a una nueva refinería construida en 1958. En 1962 las compañías de azúcar emplearon a 15.000 africanos y 370 europeos.

a) Companhia do Açúcar de Angola, S.A.R.L. (CAA)

97. La compañía se estableció en su forma actual en 1920, al fundirse varias pequeñas plantaciones bajo la administración de Antonio de Sousa Carneiro Lara (conocido como Sousa Lara) con un capital inicial de 10 millones de escudos. Al año 1939 la compañía tenía un capital registrado de 22.500.000 escudos. Además de las 3.500 hectáreas de plantaciones de azúcar también poseía plantaciones de palmeras de aceite, sisal y algodón, así como fábricas para tratar semillas oleaginosas y azúcar. En 1939 las operaciones de esta compañía dejaron ganancias por valor de 8 millones de escudos, de los cuales 5.600.000 se distribuyeron como dividendos.

98. La compañía tiene su sede en Luanda. En 1960 tenía un capital registrado de 337.500.000 escudos, y poseía 4.709 hectáreas de plantaciones de azúcar, de las cuales 2.410 hectáreas estaban situadas en Dombe Grande, en el distrito de Benguela, y 2.299 hectáreas en Tentativa, cerca de Dande, en el distrito de Malanje. La compañía produce alrededor de dos quintas partes de la producción total de azúcar del territorio; en 1965 produjo 29.075 toneladas. La empresa posee también 7.000 hectáreas de plantaciones de sisal y 250.000 palmeras de aceite, y ha construido una gran represa en el río Dande y otra en el Coporola para el riego de sus plantaciones. Cuenta asimismo con 65 canales principales, 2.180 kilómetros de canales secundarios y 68 kilómetros de obras de avenamiento. Utiliza ade-

más 165 kilómetros de líneas férreas de plantaciones, 15 locomotoras y 980 vagones.

99. En 1960 la compañía dio empleo a 8.500 trabajadores indígenas y a 450 europeos; tiene cuatro capillas, y tres hospitales y clínicas de maternidad.

b) Sociedade Agrícola do Cassequel

100. La Sociedade Agrícola do Cassequel, más conocida como Cassequel, tiene su sede y su fábrica de azúcar cerca de Catumbela, en la línea férrea de Benguela, a 13 millas del puerto de Lobito. En 1960 la compañía tenía un capital registrado de 175 millones de escudos. Además de sus plantaciones de azúcar en Cassequel — con una extensión de 9.723 hectáreas — la compañía posee plantaciones en Chimbóia, en el *concelho* de Ganda (10.730 hectáreas de sisal y café), Loge, en el *concelho* de Ambriz (8.778 hectáreas de palmeras de aceite), y en el Valle de Cavaca (1.100 hectáreas de azúcar). Asimismo, tiene una concesión de 50.000 hectáreas en Chaimbambo (*concelho* de Ganda) que se utiliza para la producción de madera y ganadería. La compañía produce anualmente unas 40.000 toneladas de azúcar y 3 millones de litros de alcohol. Es la única empresa con licencia para producir alcohol.

101. Cassequel, en su forma actual, fue establecida en 1927 como resultado de la fusión de la Sociedade Agrícola de Ganda y la Loge Sugar Company, de financiación británica. Comenzó sus actividades con una fábrica que tenía capacidad para producir 12.000 toneladas de azúcar al año. En 1929 tenía un capital de 270.000 libras esterlinas (21.600.000 escudos), mitad propiedad portuguesa y mitad propiedad de un ciudadano británico el Sr. Harry Winton, conocido como el rey del azúcar de Madeira. La maquinaria utilizada por la compañía también era de origen británico. La empresa empleaba 6.000 trabajadores autóctonos y tenía 5.000 hectáreas en producción. Según un informe de la época, el azúcar que hubiera tenido un período de maduración de dos años en Madeira tomaba tan sólo 11 meses para madurar en Angola.

102. La compañía ha construido una gran represa en Catumbela con el fin de regar las plantaciones, en las cuales la mayor parte del trabajo se hace por medios mecánicos. En 1962 tenía 108 kilómetros de líneas férreas de plantaciones para lo cual contaba con 1.302 vagones, 72 tractores de alta potencia y 59 arados mecánicos, topadoras, etc.

c) Sociedade de Comércio e Construções, S.A.R.L.

103. Esta compañía tiene su sede en Bom Jesus en el distrito de Luanda, donde están situadas sus plantaciones y sus fábricas de azúcar. La compañía es parte de Organizações Chibera, que comprende también la Sociedade Agrícola do Lucala (ver *supra*) y la Companhia de Benguela. Es muy poco lo que se sabe sobre los propietarios de la Sociedade de Comércio e Construções, y sobre la historia de esta empresa. Las plantaciones de azúcar de Bom Jesus, situadas en las riberas del río Cuanza, existen desde comienzos de siglo y hasta 1930 fueron parte de la Companhia Angolana de Cazengo. A mediados del decenio 1950-1960 se hicieron nuevas inversiones, por valor de 25 millones de escudos, para renovar el equipo. En 1956 la compañía tenía un capital registrado de 60 millones de escudos y fue autorizada a elevarlo a 80 millones de escudos.

104. Las plantaciones de azúcar de Bom Jesus tienen una extensión de 1.400 hectáreas. La fábrica tiene una capacidad para producir 600 toneladas cada 24 horas y una producción anual de 6.000 toneladas de azúcar aproximadamente.

d) Quissol

105. Las plantaciones de Quissol están situadas a unas 15 millas de la ciudad de Malanje, en el distrito de Malanje. Las plantaciones existían también al comienzo de siglo y en 1936 se convirtieron en la Fábrica Açucareira de Quissol, bajo propiedad de António de Couto Pinto. En 1954 la fábrica pasó a ser la Sociedade Agrícola de Quissol, S.A.R.L. — nombre que se le conoce ahora —, con un capital registrado de 15 millones de escudos. Parece que tanto su organización como su capital registrado, que en 1961 era de 18 millones de escudos, han sido objeto de ciertos cambios.

* Alberto Diego, "Rumo à industrialização do Angola", Junta de Desenvolvimento Industrial, Luanda, 1963.

* Angola, Serviços de Economia, "Régime Açucareiro", *Actividade Económica de Angola*, Nos. 61-63, Angola, 1962, pág. 182.

CUADRO 6

COMPAÑÍAS AZUCARERAS DE ANGOLA: EXTENSIÓN, CAPACIDAD DE LA FÁBRICA
Y PRODUCCIÓN EN 1960

Nombre	Ubicación	Capital registrado en millones de escudos ^a	Extensión (hectáreas)	Producción de caña		Capacidad de la fábrica ^b Toneladas métricas diarias	Producción de azúcar en bruto	
				Miles de toneladas	Toneladas/ hectáreas		Miles de toneladas	Rendimiento ^c
Companhia do Açúcar de Angola	Dambo Grande (Benguela)	337,5	2.400	105	61	800	11,4	6,7
	Tentativa (Luanda)		2.299	165	74,7	1.500	15,5	6,7
Sociedade Agrícola de Cas- sequel	(Catumbela) (Benguela)	175,0	4.200	316	85	2.400	29,8	10,5
Sociedade de Comércio e Construções	Bom Jesus (Luanda)	60-80	1.400	56	39,8	600	5,9	10,6
Quissol	Quissol (Malanje)	30 ^d	230	40	715	100	0,7	—
TOTAL		603-623	10.529	682		5.400	63,3	

^a Capital registrado de la compañía y no sólo de la fábrica de azúcar y las plantaciones.

^b Aparte de Bom Jesus, todas las fábricas producen azúcar blanca para el consumo y azúcar cruda para la exportación.

^c Número de toneladas de caña necesarias para producir una tonelada de azúcar.

^d Se informa que en 1958 el capital era de 20 a 30 millones de escudos, y que aumentó de 18 a 28 millones en 1961.

Reglamentos y fiscalización oficiales^w

106. Las leyes sobre el azúcar garantizan a Angola y Mozambique una cuota igual en el mercado interno del azúcar de Portugal; las cuotas se asignan cada año según las necesidades de Portugal y la producción calculada. Hasta 1945 Angola proporcionaba una media de alrededor del 50% del azúcar consumido en Portugal. Las exportaciones anuales de Angola a Portugal, que fueron en promedio de unas 33.000 toneladas durante el último decenio, no se han mantenido a la par del creciente consumo en el Portugal. La parte proporcionada por Angola descendió del 36% en 1950 al 26% en 1960, 20% en 1963 y 14% en 1964.

CUADRO 7

CUOTA DE AZÚCAR DE ANGOLA PARA FINES DE EXPORTACIÓN AL PORTUGAL, POR FÁBRICA
(En miles de toneladas)

	Extensión total de tierra	CAA	Cassequel	SCC	Exportaciones hechas al Portugal
1954/55	32.767	13.000	16.000	3.767	29.488
1955/56	25.500	6.000	17.000	2.500	25.526
1956/57	33.500	16.000	15.000	2.500	31.023
1957/58	36.202	11.194	21.864	3.144	39.262
1958/59	34.379	11.956	19.521	2.902	34.341
1959/60	35.412	16.106	15.500	3.806	35.294
1960/61	33.489	12.000	18.000	3.489	33.603
1961/62	33.064	15.000	14.000	4.064	33.064

107. La cuota del Territorio se divide entre las tres compañías más importantes habida cuenta de su producción calculada. Cada compañía puede suministrar una tercera parte de su cuota en azúcar blanca, y el resto en azúcar cruda.

108. Los precios locales al por mayor y al por menor se fijan oficialmente de conformidad con el precio de base C.I.F.

^w Los reglamentos y fiscalización oficiales del azúcar se describen con mayor detalle en el documento sobre Mozambique (apéndice III).

establecido en Lisboa. Entre 1952 y 1963, cuando los precios C.I.F. de Lisboa para el azúcar blanca y cruda eran de 3,75 escudos y 2,85 escudos por kilo, los precios al por menor en Luanda eran de 3,70 escudos y 3,00 escudos respectivamente. Como consecuencia del aumento en los precios C.I.F. de Lisboa a 4,40 escudos por kilo para el azúcar blanca y a 3,35 escudos para el azúcar cruda, se aumentaron también los precios al por menor en Luanda a 4,35 escudos y a 3,50 escudos respectivamente, con lo cual se mantuvo el mismo margen de diferencia entre los precios locales y los precios C.I.F. de Lisboa.

109. El azúcar exportada al extranjero está sujeta a una sobretasa del 16% de su valor fiscal. También se impone un recargo al azúcar exportado al Portugal, que varía según el análisis polarimétrico. En 1960 los ingresos del Territorio por concepto del azúcar fueron de 2.600.000 escudos de derecho de exportación y 4.500.000 escudos del impuesto al consumo interno.

Producción, exportaciones y consumo local

110. Tradicionalmente se ha protegido y subvencionado la producción de azúcar de Angola a fin de satisfacer las necesi-

dades del consumo interno del Portugal. Entre 1935 y 1939 la producción anual aumentó en más del 40%, de 28.200 a 40.300 toneladas. Pero al año 1944 la producción se había nivelado y durante el decenio siguiente la media anual no alcanzó a 50.000 toneladas. Si bien entre 1955 y 1964 la producción aumentó en un 50%, esta tasa es mucho más baja que la registrada en Mozambique. Durante este período el consumo en Angola aumentó a más del doble, y la producción de azúcar blanca se triplicó. Para 1964 dos terceras partes de la producción de las fábricas fueron de azúcar blanca (cuadro 8).

CUADRO 8

ANGOLA: PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN DE AZÚCAR
(En miles de toneladas)

Año agrícola	Producción*				Consumo	Exportaciones
	Total	Cruda	Blanca	Otras		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1955/56	46,0	24,9	14,2	7,2	20,0	30,5
1956/57	58,6	35,4	12,1	11,8	20,0	31,8
1957/58	60,4	34,3	16,0	10,2	20,0	40,8
1958/59	50,3	30,5	17,0	9,6	21,5	34,0
1959/60	65,0	36,2	16,6	14,7	25,0	29,9
1960/61	62,6	38,2	22,6	4,9	26,0	46,4
1961/62	62,1	32,4	38,6	—	27,6	36,6
1962/63	73,2	29,0	35,6	—	29,7	36,5
1963/64	68,2	23,6	41,8	—	42,0 ^b	23,8
1964/65	—	...	24,6

Fuentes: columnas (1) y (5): Decreto Ley 45.691, 28 de abril de 1964; columnas (2), (3), (4) y (6): informes del Banco de Angola para los respectivos años.

* Por haberse utilizado diversas fuentes existen discrepancias entre los totales de las columnas (2), (3) y (4) y las cifras de la columna (1).

^b De las cuales 15.000 toneladas de azúcar cruda y 27.000 de azúcar blanca.

111. Entre los años 1935 y 1942 el azúcar representó alrededor del 12% del valor total de las exportaciones de Angola, pero para 1950 esta proporción fue inferior al 5%. Con el aumento de las exportaciones de otros cultivos de precio alto, especialmente sisal y café, el azúcar perdió gradualmente su importancia en el comercio exterior de Angola, y en 1963 representó menos del 2% del valor total de las exportaciones, y ocupó el séptimo lugar entre las exportaciones agrícolas.

112. Durante muchos años, más del 90% de las exportaciones de azúcar de Angola fueron a Portugal, y el resto a otros territorios, a saber Cabo Verde, Guinea Portuguesa y São Tomé

y Príncipe. A partir de 1955 las exportaciones de Angola a los demás territorios de ultramar aumentaron constantemente. En 1964, el 22% de las exportaciones de azúcar se hicieron a estos territorios y el 78% al Portugal (cuadro 9). Las compañías azucareras tienen libertad de exportar sus excedentes, en relación con las cantidades que deben suministrarse al mercado local, al Portugal y a los demás Territorios. De conformidad con el Convenio Internacional del Azúcar, el Portugal tiene una cuota de 20.000 toneladas anuales que originalmente se asignó Mozambique pero que ahora puede ser utilizada por cualquier productor de azúcar del ámbito portugués. En los últimos años Angola no ha contado con excedentes para tales exportaciones.

CUADRO 9

ANGOLA — AZÚCAR: CONSUMO LOCAL, EXPORTACIONES Y PRINCIPALES
PAÍSES DE DESTINO, 1955-1964

Año	Consumo local (en miles de toneladas)	Exportaciones			Principales países de destino			
		En miles de toneladas	Millones de escudos	Porcentaje del valor total de las exportaciones	Portugal Porcentaje	Cabo Verde Porcentaje	Guinea portuguesa Porcentaje	São Tomé y Príncipe Porcentaje
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1955	20,0	30,6	83,1	2,96	92,52	4,19	1,10	2,05
1956	20,0	31,8	84,5	2,57	91,10	5,38	1,37	2,03
1957	20,0	40,7	104,1	3,10	92,60	3,90	1,66	1,79
1958	20,0	34,0	87,6	2,38	88,95	6,99	1,86	1,97
1959	21,5	29,9	77,8	2,17	89,52	5,56	1,60	3,19
1960	25,0	46,4	124,0	3,48	88,74	8,13	1,33	1,76
1961	26,0	36,6	98,3	2,54	87,23	8,52	1,93	2,31
1962	27,6	37,5	99,9	2,34	87,10	6,42	2,28	1,46
1963	29,7	23,9	60,0	1,28	79,20	12,95	3,54	3,32
1964	42,0	24,7	72,4	1,23	76,62	13,51	5,49	2,96

Fuentes: A. Los datos para los años 1955-1962 se obtuvieron en la forma siguiente: columna (1) — Portugal, Decreto-Ley No. 45.691 de 28 de abril de 1964; columnas (2), (3), (5), (6), (7) y (8) — Angola, *Anuário Estatístico*, 1962; columna (4) — Calculada de Angola, *Comércio Externo*, 1963.

B. Los datos para 1963 y 1964 se obtuvieron de: Banco de Angola, *Relatório e Contas*, 1964. Estas cifras no incluyen la melaza.

Acontecimientos recientes

113. En agosto de 1960 el Gobierno autorizó la creación de una compañía azucarera, la Companhia Açucareira do Cuanza. Esta compañía debería tener un capital registrado inicial de 80 millones de escudos, que podría aumentarse a 200 millones de escudos. Los intereses portugués y angolano tendrían igual participación en el capital, y los intereses gubernamentales y privados estarían en una relación de 5 a 3, siendo la inversión del Gobierno de Angola de 25 millones de escudos. Se esperaba que los intereses extranjeros proporcionarían un préstamo de 200 millones de escudos para la compra de equipo, y se autorizó al Banco de Desarrollo de Portugal a que garantizase dicho préstamo. Se reservó una concesión provisional de 15.000 hectáreas en la región de Muxima. El objetivo era duplicar la producción anual de azúcar de Angola. Sin embargo, en 1962 se canceló la concesión y se informó que el Gobierno pensaba utilizar la zona para establecer asentamientos basados en el azúcar. No se dispone de información reciente acerca de estos asentamientos.

*D. Algodón**Generalidades*

114. Aunque el algodón se cultivaba y usaba en Angola antes de la llegada de los portugueses y su producción ha sido objeto de muchas medidas del Gobierno en lo que va de este siglo, en ningún momento fue tan importante para la economía del Territorio como lo fue, y sigue siendo, en Mozambique. En el período 1940-55, las exportaciones medias anuales de algodón en bruto de Angola se mantuvieron en unas 6.000

toneladas. En 1960, año al que corresponde la cifra máxima, Angola exportó 8.894 toneladas de algodón en rama (en comparación con 44.398 toneladas exportadas por Mozambique), que representan algo más del 10% de las importaciones de algodón de Portugal provenientes de los territorios de ultramar y alrededor de un 4% del valor de las exportaciones visibles del Territorio. El algodón como producto de exportación ha seguido perdiendo terreno, y en 1964 sólo se exportaron 4.286 toneladas de algodón en bruto, por un valor que representó menos del 1% de las exportaciones visibles.

115. El algodón se cultiva en los distritos de Zaire (que con Uíge constituía anteriormente el distrito del Congo), Luanda, Malanje, Cuanza del Norte, Cuanza del Sur y Lunda. Las regiones más importantes son Cambo, Bondo y Bangala en la zona de Baixa de Cassange del distrito de Malanje* y Catete (antiguamente conocido como Sunginge), Icolo e Bengo en el distrito de Luanda. En 1963, a estos dos distritos correspondía aproximadamente el 92% de la producción total, del cual el 75% provenía de Malanje y el 17% de Luanda (cuadro 10).

116. La mayor parte del algodón que se cultiva es de la variedad de fibras medias; se cultiva también la variedad de fibras largas a lo largo de las regiones costeras. Aunque se ha tratado de extender el cultivo del algodón de fibras largas, la producción de esta variedad no ha aumentado, en parte porque requiere cuidados especiales, incluyendo el riego artificial, y en parte porque los precios que regían hasta ahora no eran suficientemente elevados como para que resultara rentable†.

* La zona algodonería de Baixa de Cassange comprende también una parte del distrito de Lunda.

† Walter Marques, *Problemas do Desenvolvimento Económico de Angola*, Luanda, 1964, pág. 202.

CUADRO 10

ANGOLA: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN BRUTO POR REGIONES^a
(Toneladas métricas)

Año	Total del territorio	Malanje (y Luanda)		Luanda (y Cuanza del Norte)		Cuanza del Sur		Congo (Zaire) ^b	
	Toneladas	Toneladas	% del total	Toneladas	% del total	Toneladas	% del total	Toneladas	% del total
1958	21.762	19.107	87,80	1.581	7,27	1.069	4,91	5	0,02
1959	23.717	13.570	57,98	7.467	31,48	2.194	9,25	486	2,05
1960	19.139	9.612	50,22	6.220	32,50	2.894	15,12	413	2,16
1961	13.099	8.080	61,68	3.019	23,05	1.865	14,24	135	1,03
1962	22.500	15.200	67,56	3.650	16,22	3.000	13,33	650	2,89
1963	13.697	10.479	76,51	2.587 ^c	18,89 ^c	631	4,61	•	•
1964	13.609	12.878	94,63	530	3,90	200 ^d	1,47	2	0,02
1965 ^e	19.070	11.854	62,16	4.144	21,73	3.010 ^d	15,78	61	0,32

Fuente: Banco de Angola, *Boletim Trimestral y Relatório e Contas*.

^a Las principales compañías algodonerías que tienen actividades en estas regiones son:

Malanje y Lunda	Cotonang
Luanda	Companhia do Ambriz
	Lagos e Irmão
	Rocha e Coelho
Cuanza del Sur	Algodoeira Colonial Agrícola
Zaire (Congo)	Sociedade Agrícola do Cassequel

^b Los datos correspondientes a 1958-1960 se refieren al distrito del Congo (Ambrizete). Los datos correspondientes a 1961 y fechas posteriores se refieren al distrito de Zaire. El distrito del Congo fue dividido en dos distritos: Zaire y Uíge.

^c La cifra correspondiente a Luanda-Cuanza del Norte comprende la producción de Zaire.

^d Esta cifra comprende la producción del distrito de Benguela.

^e Estimación.

Organización de la producción

117. Como se dijo anteriormente (véase el apéndice I, segunda parte), hasta los tiempos recientes el algodón era cultivado sobre todo por los africanos de acuerdo con un régimen especial en pequeños terrenos de una superficie media de media hectárea a dos hectáreas por familia. (En 1952 había sólo 49 cultivadores de algodón europeos, con 521 hectáreas, que producían 349 toneladas de algodón bruto.) En Angola este régimen especial se basaba en un cultivo obligatorio por ley y la división de las regiones de cultivo del algodón en "zonas de algodón", en que los derechos exclusivos para la compra del algodón se otorgaban a comerciantes europeos provistos de licencias (asimilado) que tenían establecimientos desmotadores de algodón. En la práctica, la mayoría de las concesiones se otorgaban a compañías.

118. En Angola, el cultivo obligatorio del algodón se remonta a 1908 (Orden del 21 de noviembre), cuando se exigió a los habitantes del *concelho* de Icolo e Bengo que cultivaran 2.500 plantas por choza (*cubata*). Luego en 1927 (Instrumento Legislativo 638, de 24 de septiembre) esta exigencia se extendió a los habitantes de Luanda, Ambriz, Quiçama, Porto Amboim y Novo Redondo. En 1931 (Instrumento legislativo 239, de 4 de junio) se exigió a las mujeres y a los menores de más de 14 años de edad que cultivaran por lo menos una hectárea de algodón.

119. En 1930 (Instrumento legislativo 242, de 18 de enero) se estableció una oficina especial de supervisión del algodón en el distrito de Malanje, en partes del cual este cultivo era obligatorio por ley. Como el número de contribuyentes había disminuido de 11.490 a 5.660 en los dos años anteriores, la Oficina de supervisión del algodón debía promover el aumento del número de cultivadores y mejorar la producción del algodón mediante una "propaganda persuasiva" y el establecimiento permanente de africanos en mayor número y en mejores condiciones de vida. El mandato de la Oficina de supervisión del algodón se hizo extensivo al año siguiente (Instrumento legislativo 276, de 5 de noviembre de 1931) a otras zonas adyacentes y se creó un sistema de bonos pagaderos a los funcionarios de

gobierno, basado en el valor del algodón producido en la región bajo su jurisdicción; el *chefe de posto* recibe 4 centavos por kilogramo y el administrador 2 centavos*. En 1947 (Decreto del Gobernador General, 28 de mayo) las compañías concesionarias de algodón fueron autorizadas a contratar obreros con ayuda de los funcionarios del gobierno.

120. En 1949 (Orden 6619, de 5 de enero) se revisaron las disposiciones que regían la superficie de algodón que debía cultivar cada africano. Las nuevas disposiciones dividían a los *indígenas* africanos en agricultores de algodón (hombres en buenas condiciones físicas, de 18 a 55 años de edad) y plantadores de algodón (hombres de 56 a 60 años de edad, y mujeres viudas, solteras y divorciadas).

121. Cada año se exigía a las compañías concesionarias que determinasen la superficie mínima para el jefe de familia y su primera esposa, para cada esposa subsiguiente y para cada hijo que estuviera en edad de trabajar; las superficies para los plantadores de algodón se determinarían también individualmente. Para la temporada de 1948-49 se dispuso que los agricultores cultivaran de 0,85 a una hectárea con algodón y una hectárea con plantas alimenticias; los plantadores debían cultivar de 0,25 a 0,35 hectáreas de algodón y superficies iguales de plantas alimenticias (Orden del Gobernador General del 5 de enero de 1949).

122. Aunque en Mozambique se dedicaban al cultivo del algodón en determinado momento casi un millón de personas, en Angola, según las estadísticas oficiales, jamás hubo más de 75.000 personas dedicadas a esa actividad. En 1955, época en que el sistema alcanzó su máxima intensidad había algo menos de 60.000 plantadores y 54.000 hectáreas dedicados al cultivo del algodón. Dado que la superficie media por cultivador era de 0,90 hectáreas, resulta evidente que muchos de ellos cultivaban entre 1,5 y 2 hectáreas (cuadro 11).

* En 1957-1959, por ejemplo, los bonos pagados a las autoridades administrativas por contribuir a promover la producción del algodón ascendieron en total a más de 300.000 escudos por año. Nunes Barata, *Localização da Sede dos Organismos de Coordenação Económica do Ultramar*, Lisboa, 1961, pág. 43.

CUADRO 11

ANGOLA: PRODUCCIÓN AFRICANA DE ALGODÓN BRUTO

Año	Volumen (toneladas)	Valor (En miles de escudos)	Producción	
			Número de cultivadores	Superficie cultivada (hectáreas)
1954	17.292	45.892	57.435	53.708
1955	20.438	55.274	57.763	54.087
1956	21.005	65.959	55.479	52.372
1957	19.581	59.950	56.552	53.526
1958	21.762	67.482	56.724	52.795
1959	23.718	72.054	54.852	51.190
1960	19.139	59.199	54.842	50.515
1961	13.099	44.690	46.673	38.654
1962	20.567	72.645	45.480	36.365
1963 ^a	13.700	46.458	46.790	36.691
1964 ^b	11.955	47.041	41.526	30.196

^a Angola: *Anuário Estatístico*.

^b Governo Geral de Angola, Secretaria Provincial de Fomento Rural: *Síntese da Actividade dos Organismos e Serviços (1963-1964)*.

123. Las disposiciones mencionadas permanecieron en vigor hasta 1961, en que se declaró libre el cultivo del algodón (Decreto 43.639, 2 de mayo de 1961). El informe de la Comisión de la OIT de 1962 instituida para examinar la observancia, por el Gobierno de Portugal, del Convenio (No. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957^a, indica que el representante del Banco de Angola y los representantes del mayor concesionario, COTONANG (véase más adelante), reconocieron sin ambages

que el cultivo del algodón había sido obligatorio, pero que después de mayo de 1961 se había hecho libre y que los africanos podían cultivar el producto o no, según desearan^{bb}. El representante de COTONANG, sin embargo, manifestó que si bien el cultivo del algodón no era ya forzoso, los africanos estaban obligados a dedicarse a alguna forma de actividad aprobada puesto que "no se les permitía permanecer ociosos".

124. En 1960 existían 10 compañías algodonerías concesionarias. En 1954, éstas poseían 23 establecimientos desmotadores. En el cuadro siguiente se enumeran dichas compañías, la ubicación de las zonas que tienen en concesión y datos sobre otras actividades.

^{bb} *Ibid.*, párrs. 408 y 431.

^a Oficina Internacional del Trabajo, *Informe de la Comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la queja presentada por el Gobierno de Ghana relativa a la observancia por el Gobierno de Portugal del Convenio (No. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957*, Ginebra 1962.

ANGOLA: COMPAÑÍAS CONCESIONARIAS DE ALGODÓN, 1960
(Establecimientos desmotadores existentes según información de 1955)

Compañía	Distrito de la concesión	Ubicación		Detalles
		Concelho o circunscriçao de los establecimientos desmotadores		
Algodoeira Colonial Agrícola	Cuanza del Sur	Porto Amboim y Seles (Hote)		—
Companhia do Ambriz	Luanda	Ambriz (Tabi)		Sede: Tabi: Capital (en 1962): 11 millones de escudos. Actividad principal: café. Otras actividades: algodón, aceite de palma, coco y sal.
Companhia Geral dos Algodoes de Angola, SARL — (COTONANG)	Malanje	Diez establecimientos desmotadores, ubicados todos en el distrito de Malanje		Es el mayor de los concesionarios. Sede: Lisboa. Capital (en 1962): 42 millones de escudos.
Empresa dos Tabacos de Angola	Luanda	Dande (Icau)		De propiedad del mismo grupo que la empresa Agro-Industrial de Angola (EMANFOLA).
Lagos e Irmão	Luanda	Icolo e Bengo (Catete)		Concesión anulada por la Portaria (Angola) No. 12.923 del 28 de septiembre de 1963.
Marques Seixas y Ca. Lda.	Cuanza del Sur	Novo Redondo		Otros productos: arroz.
Rocha y Coelho	Luanda y Cuanza del Sur	Quicama		Concesión anulada por la Portaria (Angola) No. 12.862 del 10 de agosto de 1963.
Sociedade Agrícola do Cassequel, SARL	Zaire (3 zonas)	Ambrizete (Loge)		Fundada en 1927. Sede: Catumbela (Lobito); capital registrado: 175 millones de escudos. Actividad principal: azúcar. Otras actividades: algodón, aceites vegetales, sisal, ramio, alcohol y pesca.
Sociedade Comercial do Ambriz, Lda.	Zaire Cuanza del Norte (4 zonas)	Ambrizete Cambambe		Sede: Lisboa.
Mota e Irmão	Luanda	Dande		En 1960 el establecimiento desmotador figuraba como Sociedade Comercial Motas, Limitada (SOCOMOL). En 1955 Mota se dedicaba también a la elaboración de algodón en el distrito del Congo y de aceite vegetal en el distrito de Luanda.

125. El mayor concesionario de algodón es la Companhia Geral dos Algodões de Angola SARL-COTONANG. Establecida en 1926 por la Companhia Fomento Geral de Angola, sus actividades comprenden el cultivo, la elaboración industrial y la comercialización del algodón. COTONANG está registrada como compañía portuguesa y hasta 1962 tenía su sede en Lisboa; también tenía un comité permanente en Bruselas, cuyos miembros eran elegidos por el Directorio. En 1926 su capital inicial era de 6 millones de escudos divididos en acciones de 100 escudos cada una. Los miembros del primer directorio eran los señores: Arno S. Pearce, Baltasar Freire Cabral, Conde Jean de Hemptine, Ernesto de Vilhena, João Henrique Ulbrich,

José de Melo Breyner, José Alard, Pierre Clynans, Robert Mees, Tomás de Aquino de Almeida Garret. Cada uno de los miembros del directorio poseía por lo menos 100 acciones del capital de la compañía.

126. Este capital se elevó a 40 millones de escudos y, según los informes, en 1962 no había cambiado.

127. COTONANG tenía las concesiones de algodón de la región de Baixa do Cassange, que es la zona productora más importante. En 1960 tenía 33.000 cultivadores que trabajaban 30.000 hectáreas en la zona de concesión de la compañía. En 1961 contaba con 30.000 cultivadores, que trabajaban 23.000 hec-

tareas y preveía que el número de cultivadores podría reducirse a 25.000. En el período de 1954-1960, la producción anual de algodón dentro de su concesión fue, por término medio, de unas 12.000 toneladas, de las cuales, de acuerdo con sus informes anuales, pagó 40 millones de escudos a los cultivadores.

128. En 1955, COTONANG era propietaria de establecimientos desmotadores de algodón situados en Cuale (*concelho* Duque de Bragança), Milando (*circunscrição* de Cambo), Massango (*circunscrição* de Forte República), Caombo (*circunscrição* de Combo), Quela (*circunscrição* de Bondo e Bângala), Xandel (*circunscrição* de Bondo e Bângala), Quitapa (*circunscrição* de Songo), Marimba, Jonga y X. Muteba.

129. COTONANG también tiene actividades en otros campos, tales como el de los aceites vegetales, la carpintería y la metalurgia. Todas sus fábricas están ubicadas en el distrito de Malanje. El establecimiento destinado a la elaboración industrial de aceites, tortas oleaginosas y borra de algodón se construyó en 1954, su costo fue de 20 millones de escudos y su capacidad diaria es de 40 toneladas de semilla de algodón.

130. Una vez que el cultivo de algodón pudo hacerse libremente y que se elevó el precio de compra de la semilla fijado por el gobierno, COTONANG decidió cultivar su propio algodón en vez de comprarlo a los cultivadores africanos. En 1962 inició el cultivo mecanizado en 400 hectáreas. Tiene intención de cultivar 10.000 hectáreas, mediante una inversión de 50 millones de escudos. No obstante, hasta que la cosecha del producto pueda mecanizarse, la compañía seguirá dependiendo de la mano de obra africana.

131. Lagos e Irmão recibieron su concesión en Catete en 1936. Su producción anual de algodón bruto es de aproxima-

damente 5.000 toneladas, por las que paga a los cultivadores 15 millones de escudos por año. La Compañía posee acciones de la Companhia do Manganés de Angola y de la fábrica de cemento Secil, y también produce café.

132. Como ya se indicó en el apéndice I, segunda parte, el código de trabajo de 1928 y las disposiciones relativas a la mano de obra (incluida la obligación de trabajar) quedaron derogadas en 1962. La legislación especial de 1961 y 1963 puso fin al cultivo obligatorio y a toda la intervención por parte de funcionarios del Gobierno en el cultivo del algodón; dispuso la abolición de las concesiones al 31 de agosto de 1966, y estableció un Instituto del Algodón de Angola para supervisar el cultivo y la compra de este producto a los agricultores (para detalles sobre el Instituto del Algodón, véase el apéndice I, segunda parte).

133. Para 1964 sólo cuatro compañías algodoneras aún tenían concesiones. Estas cuatro eran Sociedade Colonial Algodoeira de Angola (SCAL), Cassequel, Companhia do Ambriz y Mota e Irmão, pero poseían juntas sólo 1.198 hectáreas y estaban obligadas a supervisar a 1.706 agricultores africanos. Todas las otras zonas de cultivo de este producto se encontraban bajo la vigilancia directa del Instituto del Algodón^{ee}.

^{ee} El presupuesto total estimado del Instituto del Algodón para 1965 era de 52 millones de escudos, incluidos 14.500.000 escudos del Fondo de Fomento del Algodón. El costo estimado de la compra de algodón bruto, del transporte y almacenamiento era de 23.760.000 escudos, por el que dicho Instituto calculaba recibir 28.500.000 escudos. (*Boletín Oficial*, Angola, Serie I, No. 13, 27 de marzo de 1965.)

CUADRO 12

ANGOLA: CULTIVADORES DE ALGODÓN AFRICANOS, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN SUPERVISADOS POR EL INSTITUTO DEL ALGODÓN, 1961-1964

Año	Total			Instituto del Algodón		
	Cultivadores africanos	Superficie cultivada (hectáreas)	Producción de algodón bruto (toneladas)	Cultivadores africanos	Superficie cultivada (hectáreas)	Producción de algodón bruto (toneladas)
1961	46.673	38.654	13.099	—	—	—
1962*	45.480	36.365	20.950	8.467	7.455	3.993
1963	46.790	36.690	13.726	7.199	5.188	1.127
1964	41.596	30.193	11.955	39.890	29.988	11.764

* En 1962 la zona algodонера de Catete se encontraba bajo la supervisión directa del Instituto del Algodón, pero volvió a la compañía concesionaria en 1963.

134. El número total de cultivadores de algodón en Angola disminuyó en un 15%, pasando de 54.842 en 1960 a 46.673 en 1961, y a 41.596 en 1964. La superficie cultivada disminuyó en un 22% entre 1960 y 1961, pasando de 50.515 hectáreas a 38.654. Según el informe de la Secretaría Provincial de Fomento Rural de Angola^{da} entre 1963 y 1964, la superficie total cultivada disminuyó, pasando de 43.000 a 39.000 hectáreas y la producción de algodón bruto de 16.711 a 13.609 toneladas. En 1963 correspondía a los africanos el 85% de la superficie cultivada (37.000 hectáreas) y el 82% de la producción.

135. Se recordará que la legislación de 1955 (Decreto 40.405), descrita en el apéndice anterior, disponía el establecimiento de cooperativas de cultivadores de algodón africanos fuera de las zonas otorgadas en concesión. Según dichas disposiciones, esas cooperativas podían crearse a pedido de por lo menos 100 cultivadores y debían ser aprobadas por el gobierno territorial. Cada cooperativa sería administrada por un consejo

de tres miembros, junto con un representante del Instituto del Algodón.

136. En 1961 existían cinco cooperativas de cultivadores de algodón: cuatro en el distrito de Luanda, con una superficie total de 900 hectáreas, y una en Cuanza del Sur, con 120 hectáreas. En 1962 se establecieron tres más, de las cuales dos se encontraban en la región de Catete y una en Jimba, Cuanza del Sur, que contaba con 300 miembros y una superficie de 300 hectáreas.

137. Además de los cultivadores africanos, en 1963 existían 112 productores de algodón registrados. De éstos, sólo 61 cultivaban realmente el algodón en 6.364 hectáreas, produciendo casi 3.000 toneladas. La producción media en kilogramos por hectárea de estos cultivadores independientes era de 383 en el distrito de Luanda, 160 en Cuanza del Norte, 499 en Cuanza del Sur y 520 en Malanje. Entre los cultivadores independientes del distrito de Luanda se encuentran las colonias algodonerías especiales auspiciadas por el Gobierno. En 1964 existían 66 productores independientes, que cultivaban 8.757 hectáreas; sin embargo, su producción fue en total de sólo 1.654 toneladas, debido a una mala temporada.

^{da} Angola, Secretaría Provincial de Fomento Rural, *Síntese da Actividade dos Organismos e Serviços, 1963-1964*, Luanda, 1965, pág. 79.

Industria textil algodонера

138. La política portuguesa que reglamenta el establecimiento de industrias en los Territorios de Ultramar y la legislación relativa a las industrias textiles en Angola y Mozambique se ha descrito en el estudio anterior. Se recordará que (en virtud del Decreto 33.924, del 5 de septiembre de 1944) para impedir la competencia, con los intereses portugueses, se dieron derechos preferentes a las fábricas textiles de Portugal para establecer industrias textiles en los territorios o para adquirir acciones; el precio del algodón para las industrias locales se fijó al mismo nivel que el correspondiente a las industrias portuguesas; y la producción textil anual local de cada territorio se limitó cuidadosamente al 20% del término medio de sus propias importaciones de esos productos del Portugal, efectuadas en los tres años anteriores a 1939.

139. En virtud de la autorización que otorgaban las disposiciones mencionadas, la Sociedade Algodoeira de Portugal se formó poco después con capital portugués para desarrollar sus operaciones en Mozambique, y la Companhia de Fomento Colonial, de Angola, que anteriormente se había dedicado a la agricultura en el territorio, inició la fabricación de tejidos como actividad principal.

140. La fábrica de textiles de Luanda inició la producción en 1946. En 1950 (Decreto Ley 37.847, 3 de junio) el Gobierno aprobó la fusión de las compañías textiles existentes en los Territorios de Ultramar y como resultado de ello la Sociedade Algodoeira de Portugal que se encontraba en dificultades financieras y no había comenzado aún a producir textiles en Mozambique, se unió a la Companhia de Fomento Colonial y se convirtió en la Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, que es actualmente el mayor productor de tejidos tanto en Mozambique como en Angola, donde se la conoce como Textang.

141. La Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial es de propiedad conjunta del Estado (que fue autorizado en virtud del Decreto 37.847, de 3 de junio de 1950, a invertir hasta 40 millones de escudos) y firmas textiles portuguesas. En 1963,

esta compañía tenía un capital registrado de 200 millones de escudos, pero el total del capital realmente invertido a fines de 1964 era de 514 millones de escudos.

142. En 1964, la compañía informó que tenía un superávit de más de 12 millones de escudos proveniente de sus operaciones de Mozambique, más de 5 millones de escudos de Angola y un déficit de 322.000 escudos en Lisboa, donde se encuentra su sede. La compañía produce unos 18 millones de metros de textiles por año, valuados en 150 millones de escudos, pero cuenta con la capacidad necesaria para elevar esta cifra a 200 millones de escudos. De acuerdo con el Presidente del Directorio, sus operaciones fueron afectadas en 1964 por los precios más elevados que debió pagar por el algodón, por los mercados limitados de Angola y Mozambique y por las dificultades de la competencia en el mercado internacional. Las actividades de esta compañía se describen con mayor detalle en el estudio sobre Mozambique (véase el apéndice III).

143. Textang tenía un capital registrado de 50 millones de escudos en 1955 y empleaba a 600 obreros. Su producción ha aumentado en años recientes. En 1962, se informó que su capacidad era de 1.200 toneladas anuales pero no había alcanzado esa cifra máxima.

144. Sólo existe otra fábrica de tejidos de algodón en Angola, que es de propiedad de la Fábrica Imperial de Borracha Limitada (FIB). Fue establecida en 1957 con un capital registrado de 3.300.000 escudos. En 1962 esta fábrica tenía una capacidad de 1.250 metros de tejidos por día.

145. Ambas fábricas de tejidos producen también frazadas y calcetines de algodón. Además, en 1963 existían dos fábricas de algodón absorbente, cuyo capital conjunto era de 2.600.000 escudos, y cuya producción se valuaba en 1.600.000 escudos. Existen también otras cuatro fábricas productoras de artículos de tejido de algodón cuyo capital total es de 1.200.000 escudos.

146. La producción total de tejidos y otros productos de algodón se indica en el cuadro siguiente, junto con el volumen de las importaciones de tejidos de algodón provenientes de Portugal.

CUADRO 13

ANGOLA: PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIÓN DE TEJIDOS Y OTROS PRODUCTOS DE ALGODÓN

Año	Producción local		Importaciones ^b	
	Volumen (metros) ^a	Valor (miles de escudos)	Volumen (toneladas)	Valor (miles de escudos)
1955	4.219	258.756
1956	3.121	...	5.404	319.649
1957	3.403	...	5.910	349.318
1958	3.299	40.812	6.075	345.365
1959	3.112	39.562	5.903	317.018
1960	3.251	38.500	5.020	276.513
1961	3.842	48.100	2.999	176.775
1962	4.394	61.000	4.210	268.941
1963	6.871	66.772	5.434	383.498
1964	71.031	5.708	403.854

Fuentes: Importaciones, Angola, *Anuário Estatístico, Comercio especial por classes e seções*. Producción local y datos correspondientes a 1963 y 1964, Banco de Angola, *Relatório e Contas*.

^a Todos los productos de algodón incluso frazadas, que en general representan más del 10% del valor total de la producción.

^b Tejidos e hilados de algodón.

Subproductos del algodón

147. Hasta 1952, no existía ninguna fábrica productora de aceite de semilla de algodón. En 1964 COTONANG estableció una en el distrito de Malanje. Existen otras dos, Induve y Comgeral.

148. La producción de aceite de semilla de algodón fue de 1.241 toneladas (10.200.000 escudos en 1960); 916 toneladas (7.700.000 escudos) en 1961 y 933 toneladas (8.300.000 escudos) en 1962. En 1961, se exportaron 220 toneladas de aceite de semilla de algodón, o sea, 487 toneladas menos que en 1960. En 1962 no se exportó cantidad alguna.

CUADRO 14

ANGOLA: EXPORTACIÓN DE ACEITE DE SEMILLA DE ALGODÓN Y OTROS SUBPRODUCTOS

Año	Semilla de algodón		Aceite de algodón		Bagazo	
	Volumen (toneladas)	Valor (miles de escudos)	Volumen (toneladas)	Valor (miles de escudos)	Volumen (toneladas)	Valor (miles de escudos)
1960	607
1961	220
1962
1963 ^a ...	1.599	22.016	330	1.877	3.991	8.114
1964 ^a ...	909	1.182	2	16	1.651	3.300

^a Fuente de los datos correspondientes a 1963 y 1964: Angola-Secretaría Provincial de Fomento Rural: *Síntese do Actividade dos Organismos e Serviços, 1963-1964*, Luanda, 1965, pág. 78.

La función económica del algodón

149. Durante todo el período comprendido entre 1926 y 1961, el algodón se produjo en Angola por el sistema de cultivo obligatorio, para responder a las necesidades de la industria textil portuguesa y ahorrar las divisas que hubieran sido necesarias para comprar el algodón en otras partes. Sin embargo, el cultivo del algodón nunca se difundió en Angola y la producción anual de algodón bruto al promediar el decenio de 1950 fue, por término medio, de sólo unas 20.000 toneladas. Desde que el cultivo se hizo libre en mayo de 1962, éste ha declinado, y en 1964, la producción fue de sólo un 60% de la producción anual media del decenio de 1950.

150. Aunque el algodón nunca representó una parte significativa del comercio de exportación visible de Angola, estuvo sujeto a grandes impuestos^{**}. Por otra parte, el sistema de cultivo forzoso y el bajo precio de compra fijado por el Gobierno, fueron causa de penurias para los cultivadores africanos^{**} y según lo informó la Subcomisión encargada de examinar la situación en Angola^{**}, provocó muchas quejas.

151. Se recordará que la Comisión de la OIT informó que en 1961 los cultivadores de algodón de la región de Cambo recibían por término medio 1.230 escudos^{ah}. Como este era el ingreso bruto antes de efectuado el pago del impuesto personal que era entonces, por término medio, de unos 100 a 150 escudos, el ingreso medio mensual neto, una vez pagado el impuesto, habría sido de unos 100 escudos o alrededor de 3,50 dólares

de los EE.UU. En contraste con esto, el ingreso bruto por hectárea de café era probablemente de 3.000 a 5.000 escudos por hectárea por año (véase el párr. 69, *supra*).

152. En virtud del sistema que prevalecía antes de 1961, Angola exportaba a Portugal casi todo el algodón bruto producido, y hasta 1960, la producción de la industria textil local era de menos del 10% del valor de las importaciones de algodón del territorio, provenientes de Portugal (véase el cuadro 13). La producción local de tejidos de algodón, que siguió siendo de unos 3.200.000 metros entre 1956 y 1961, aumentó en 1962 a 4.400.000 metros. En 1964, las importaciones de textiles de Angola provenientes de Portugal, incluyendo el hilado de algodón, llegaron en total a 5.709 toneladas, evaluadas en 404 millones de escudos, es decir, algo más de 14 millones de dólares, y ocuparon el segundo lugar de las importaciones, por su valor, después del vino.

153. Según un informe de 1965 (véase la nota de pie de página^{at}) debido a la reducción de la producción de algodón en Angola, y en menor grado en Mozambique, durante el período de 1963-1964, Portugal debió importar en total unas 75.000 toneladas de algodón bruto de fuentes extranjeras a un costo de alrededor de 1.520.000 escudos. Para que la producción de algodón resultara más interesante, en julio de 1965 (Orden 12.858, 31 de julio), el Gobierno de Angola aumentó el precio de compra mínimo del algodón bruto vendido por los africanos en los mercados rurales fuera de las zonas de concesiones, y suspendió el impuesto que había establecido desde 1963 sobre el algodón bruto con el fin de destinarlo al ingreso del Fondo de Fomento del Algodón (véase el párrafo 108 del apéndice I).

154. En virtud de las nuevas leyes de control industrial, las condiciones para el establecimiento de industrias en los Territorios de Ultramar se han hecho más liberales y en lo futuro se establecerán nuevas fábricas de tejidos en Angola, mientras no compitan con las establecidas en Portugal u otros Territorios de Ultramar. No obstante, como los derechos de importación sobre las mercaderías provenientes de Portugal y otras partes de los territorios portugueses se han abolido, como se dijo anteriormente (véase cap. V, párr. 129), se calcula que transcurrirán algunos años antes que las industrias propias de Angola se desarrollen lo suficiente como para responder a las necesidades del Territorio.

^{**} En 1965, por ejemplo, los impuestos y derechos sobre el algodón en rama ascendían a 3 escudos por kilogramo cuando el precio F.O.B. medio era de 17,3 escudos (Instrumento legislativo 3.569, de 31 de julio de 1965).

^{at} De hecho, como se indicó recientemente en un artículo, el productor era quien recibía la menor ganancia cuando las había, y quien soportaba todas las pérdidas. ("Novos rumos para a cultura algodoeira", *Atualidade Económica*, Luanda 9 de septiembre de 1965, pág. 9.)

^{ah} Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Suplemento No. 16 (A/4978), párrs. 266 a 271.

^{ah} Oficina Internacional del Trabajo, *op. cit.*, pág. 284, nota 1.

CUADRO 15

ANGOLA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE ALGODÓN DESPEPITADO

Año	Producción Volumen (toneladas métricas)	Exportaciones		
		Volumen (toneladas métricas)	Valor (en miles de escudos)	Porcentaje del valor total de las exportaciones
1950	5.202	7.028	81.393	3,75
1951	4.996	4.058	56.765	1,78
1952	7.098	6.186	92.183	2,89
1953	6.064	5.473	82.037	2,32
1954	6.001	5.871	89.415	3,02
1955	7.073	6.266	93.039	3,32
1956	7.302	5.908	94.070	2,86
1957	6.823	7.363	124.385	3,70
1958	7.503	5.033	85.000	2,30
1959	8.268	6.356	104.662	2,92
1960	6.636	8.894	146.376	4,11
1961	4.980	4.120	69.033	1,78
1962	7.205	5.712	99.018	2,32
1963	5.592	4.286	79.604	1,68
1964	4.553	3.194	52.919	0,90

Fuentes: Producción de algodón despepitado: *Diário de Lisboa, Portugal 1964*, pág. 197, cuadro "Producción de fibra de algodón". Las cifras correspondientes a 1962 y 1963 están sujetas a revisión, según se informa. Exportaciones: Angola, *Anuário Estatístico* (cuadros: "Exportação Agrícola" y "Evolução do Movimento Comercial"). Para los años 1963 y 1964: todos los datos provienen del Banco de Angola, *Relatório e Contas*.

E. Maíz

Generalidades

155. En las mesetas y el litoral de Angola el maíz constituye el principal cultivo con fines de alimentación; en las demás regiones, el alimento básico es la mandioca. Desde principios del siglo actual hasta antes de la segunda guerra mundial, el maíz fue el principal producto de exportación del Territorio, tanto en volumen como en valor. Por ejemplo, durante el período 1936-1940 el promedio de las exportaciones anuales de maíz pasó de 110.000 toneladas y representó casi el 57% del valor del total de las exportaciones visibles. Como ya se ha indicado (párrs. 2 y 3), a partir del decenio 1950-1960 en las exportaciones de Angola ha predominado especialmente el café y, en menor grado, el sisal. A consecuencia de ello el volumen de las exportaciones de maíz casi no ha variado; en 1964 fue de 104.00 toneladas. Aunque el maíz todavía ocupa, por su valor, el tercer lugar entre las exportaciones agrícolas del Territorio, en 1964 representó menos del 3% del valor del total de las exportaciones visibles.

156. Las zonas de producción más importantes son: a) la meseta de Benguela, especialmente en una franja de unos 100 kilómetros a lo largo del ferrocarril de Benguela, entre Ganda y el río Cuanza; b) la meseta de Huambo-Bié, donde la mayor parte de la producción está en manos de colonos europeos; c) la meseta de Malanje, y d) el *concelho* de Icolo e Bengo, cerca de Luanda. También se hacen algunos cultivos de maíz en el interior, pero no se dispone de estadísticas de la producción. Los únicos datos disponibles se refieren a las cantidades adquiridas anualmente, que no guardan necesariamente una relación directa con la producción anual sino que más bien están afectadas por el precio de compra que fija el Gobierno por motivos que se explican más adelante.

Organización de la producción

157. Si bien la mayor parte del maíz la producen africanos en parcelas pequeñas de aproximadamente una hectárea por familia, también existen algunos cultivos en explotaciones agrícolas europeas y en colonias de africanos patrocinadas por el

Gobierno. Se calcula que en 1942 los cultivos abarcaban unas 563.444 hectáreas y la producción media anual de los períodos 1940-1950 y 1950-1960 se estimó entre 300.000 y 400.000 toneladas. El rendimiento medio de los solares cultivados por africanos oscila entre 300 y 400 kilogramos por hectárea, vale decir, cerca de la mitad de las granjas europeas de Angola, y aproximadamente un tercio de la producción media de los principales países productores de maíz. El bajo rendimiento y las fluctuaciones de la producción se atribuyen oficialmente a que la agricultura africana sigue basándose en simples métodos tradicionales y a que la cosecha depende totalmente de las condiciones atmosféricas.

158. Como se ha descrito en el estudio anterior sobre la concesión, ocupación y colonización de tierras en Angola y Mozambique (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II), aunque a partir de 1950 el Gobierno comenzó a organizar colonias permanentes de africanos con el fin de mejorar las técnicas agrícolas tradicionales, estas colonias abarcaban solamente una proporción ínfima de la población total y, hasta 1964, no habían contribuido a aumentar el volumen de las exportaciones de maíz ni de otros productos alimenticios tradicionalmente cultivados en África.

Reglamentación y fiscalización oficiales

159. Por ser una de las más antiguas exportaciones de Angola, desde 1914 el maíz ha sido objeto de diversas medidas gubernamentales destinadas a mejorar la calidad y aumentar la exportación. Como se ha descrito en el estudio anterior sobre la organización de la agricultura y la política oficial, hasta 1961 se aplicaron reglamentaciones laborales y el impuesto relativo a los indígenas, como se denominaba entonces, para inducir a los africanos a aumentar su producción. Además, en Angola esas medidas se reforzaban con otras que prevenían el cultivo obligatorio del algodón (véase la sección D *supra*) y, durante ciertos períodos, también de productos alimenticios, según se explica más adelante.

160. En 1931 se introdujo el cultivo forzoso de productos alimenticios y de otra índole (Angola, Instrumento legislativo 239, de 26 de mayo). Todos los indígenas africanos físicamente sanos tenían que cultivar por lo menos una hectárea de productos alimenticios ordinarios (como el maíz, el frijol y el trigo),

de plantación (como las palmas y el café) o anuales (como el algodón, el ricino y la mandioca). A los africanos polígamos se les exigía el cultivo de media hectárea más — o su equivalencia — por cada esposa adicional. Los varones de 14 a 16 años y físicamente sanos tenían que cultivar por lo menos un cuarto de hectárea.

161. Los funcionarios administrativos debían emplear "todos los medios legales" para obligar a los africanos a cumplir dicha orden y, en caso necesario, proporcionarles semillas que éstos debían reembolsar al hacer la cosecha, con la mejor calidad disponible y con un aumento del 5% sobre la cantidad recibida originalmente. Los africanos que no cultivasen la superficie y los productos establecidos se exponían a un castigo máximo de 90 días de trabajo correccional.

162. No se ha podido determinar claramente durante cuánto tiempo estuvo en vigencia el cultivo obligatorio para toda la población. Sin embargo, cabe señalar que el cultivo sólo podía imponerse oficialmente a fin de garantizar existencias de alimentos. No obstante, a partir de entonces el promedio anual de las exportaciones de maíz aumentó, de 67.000 toneladas durante el período 1931-1935, a 133.000 toneladas durante 1936-1940.

163. Una de las principales dificultades que se planteaban en Angola al tratar de aumentar la producción de maíz residía siempre en los bajos precios fijados por el Gobierno. Por ejemplo, según un artículo publicado en *African World*¹¹, en 1930 el precio de compra era de 400 escudos la tonelada junto a la línea ferroviaria, y el precio real de compra a los africanos era de aproximadamente 1,5 angolares por cada 15 kilogramos. A este precio, el africano que cultivaba una hectárea, con un rendimiento medio no mayor de 600 kilogramos por hectárea, no podía hacer frente al pago de los impuestos (que en algunas regiones ascendían a 104 angolares) ni siquiera en caso de vender toda su cosecha.

164. A fin de concentrar bajo una sola autoridad las actividades de comercio y reglamentación relacionadas con el maíz, en 1933 se estableció en Lisboa el Gremio del Maíz Colonial Portugués (Grémio do Milho Colonial Português), integrado por los exportadores de maíz de las colonias y los importadores del Portugal, al que se confió la responsabilidad por la venta de todo el maíz producido en las colonias y colocado a su disposición. Tenía las obligaciones siguientes: a) organizar la comercialización (distribución) del maíz de tal manera que no rebasara las necesidades ordinarias del mercado del Portugal; b) fiscalizar los precios mediante la estabilización del importe pagado a los cultivadores indígenas y el control del costo del transporte desde el lugar de producción al de consumo; c) fijar el precio de venta del maíz en el Portugal y cualesquier otras zonas bajo su jurisdicción; d) contribuir a mejorar la calidad del maíz exportado desde las colonias mediante la distribución de semilla seleccionada a los cultivadores, el establecimiento de cámaras de inmunización, la organización de la elaboración y normalización del maíz y la concesión de préstamos a los miembros del Gremio.

165. La legislación disponía también que, al fijar el precio de compra que debía abonarse a los cultivadores africanos, el Gremio debía ajustarse a la norma de que las utilidades netas del comerciante no debían exceder del 5% de los gastos reales desde la compra hasta la venta¹².

166. El consejo de administración del Gremio, integrado por el Presidente, el Vicepresidente y tres miembros, debía incluir como mínimo tres miembros escogidos entre los ocho importadores que hubiesen recibido las mayores cantidades durante los dos años anteriores. Participaba en el consejo un representante del Ministerio de Colonias, cuyo sueldo pagaba el Gremio. Este representante tenía derecho de suspender — y el Ministro de Colonias el de anular — toda decisión adoptada por el consejo.

167. En la práctica, la principal obligación del Gremio consistía ante todo en cerciorarse de que el Portugal tuviese abas-

tecimientos adecuados de maíz de las colonias y, en segundo lugar, en hacer arreglos para exportar el remanente a los demás Territorios y a países extranjeros. Como los precios del maíz eran más elevados entonces en el Portugal que en el mercado mundial, las utilidades de las ventas a ese país se destinaban a subvencionar las exportaciones a otros países. Para financiar estas operaciones, se creó en 1934 un fondo de reserva especial de estabilización (Decreto 24.653, de 15 de noviembre) formado a base de un gravamen porcentual sobre las ganancias procedentes de las ventas de maíz.

168. Sin embargo, al año 1936 el fondo de reserva del Gremio quedó agotado y los miembros del Consejo de Administración dimitieron a raíz de un desacuerdo con el representante del Gobierno. Como consecuencia de ello las funciones del Consejo fueron asumidas por un comité especial nombrado por el Gobierno.

169. La aparente necesidad de que el Gobierno coordinase y fiscalizase mejor las actividades relacionadas con el comercio del maíz condujo, en 1938, a la creación de la Junta de Exportación de Cereales Coloniales (Decreto-Ley 28.899, de 5 de agosto). Esta Junta fue establecida según las mismas pautas de los demás órganos de coordinación económica correspondientes al algodón y al café y también fijó su sede en Lisboa. Aunque se tenía el propósito de que más adelante ejerciera autoridad sobre otros cereales, su competencia inicial fue limitada al maíz y el trigo (y la harina) producidos en las colonias. Sus principales funciones eran las siguientes: proteger a los productores de cereales; supervisar la producción y el comercio en maíz y trigo, reglamentar las exportaciones al Portugal y al extranjero de manera que la producción de los territorios de ultramar complementase la del Portugal; garantizar el abastecimiento de dichos cereales a los mercados colonial y metropolitano; fijar los precios de venta de los cereales en el Portugal — salvo cuando estuviesen fijados por ley — habida cuenta de los intereses de los habitantes del Portugal y las colonias. También incumbía a la Junta la uniformidad del maíz y el suministro a los productores europeos e indígenas de semillas, insecticidas, abonos y otra asistencia para mejorar la calidad del producto destinado a la exportación. Además, quedó autorizada a comprar, a precios equitativos, maíz procedente de productores europeos o de exportadores que no fuesen productores.

170. Al crearse la Junta de Exportación de Maíz Colonial la mitad de los fondos que anteriormente poseía el Gremio para la estabilización de las exportaciones fue asignada a la Junta como capital para adquirir maquinaria, depósitos, materiales y equipo, en tanto que volvió a permitírsele al Gremio que eligiese su propio Consejo de Administración (Decreto-Ley 28.900, de 5 de agosto de 1938). A consecuencia de estos cambios, el Gremio — que mantuvo su sede en Lisboa — pasó a ser principalmente una asociación comercial encargada de comprar maíz en los territorios de ultramar y exportarlo bajo la supervisión de la Junta de Exportación de Cereales.

171. Aunque tanto el Gremio como la Junta de Exportación de Cereales Coloniales establecida en 1938, debían funcionar en todos los Territorios de Ultramar, sus principales actividades se desarrollaban en Angola. Por lo tanto, cuando en 1961 el Gremio fue reorganizado (Decreto-Ley 43.640, de 2 de mayo de 1961) y se convirtió en un "Gremio voluntario", conservando sus funciones de comprador, su sede fue trasladada a Angola. En fecha posterior del mismo año se abolió la Junta de Exportación de Cereales Coloniales (Decreto 43.876, de 24 de agosto de 1961), que fue reemplazada en Angola por un nuevo Instituto de Cereales.

172. El Instituto de Cereales de Angola se hizo cargo inicialmente del maíz, el trigo y el arroz, y luego se le añadió el frijol, el maní y las semillas de ricino. Todos los exportadores e importadores de cereales tienen que inscribirse en el Instituto y todos los productores, comerciantes y elaboradores de cereales recaen bajo su autoridad aun cuando no están obligados a inscribirse en él. Además de asumir las funciones de la antigua Junta Exportadora de Cereales Coloniales, el Instituto tiene a su cargo la protección de los pequeños productores. En tanto que la mencionada Junta sólo podía comprar cereales a los productores europeos, esta restricción se ha eliminado y el Ins-

¹¹ Edición del 19 de julio de 1930, pág. 537.

¹² Como señala Marcelo Caetano en *O Problema do Nativo*, al fijar por este método el precio abonado a los cultivadores africanos no se tenía en cuenta el valor de intercambio del maíz en la economía local.

tituto está autorizado a adquirir cereales ofrecidos por productores y comerciantes que no sean exportadores, luego de establecer un fondo de estabilización de precios. En 1965, el presupuesto del Instituto se calculó en 125 millones de escudos.

173. La cantidad de maíz que ha de suministrarse cada año al Portugal la determina el Comité de Coordinación Económica y por el Ministerio de Ultramar, con el asesoramiento del Instituto Nacional del Pan y la Federación Nacional de Productores de Trigo, teniendo en cuenta la propia producción del Portugal y la de los Territorios de Ultramar (Orden 18.930, de 29 de diciembre de 1961).

174. En noviembre de 1961 se abolieron en los dominios portugueses las restricciones a base de cuotas para las importaciones y exportaciones (Decreto-Ley No. 44.016, de 8 de noviembre); sin embargo, se retuvieron las cuotas respecto de un número limitado de productos, con inclusión del maíz y su harina, el maní y su aceite, y el tabaco manufacturado. En lo tocante al Portugal, la cuota anual de maíz importado de los Territorios de Ultramar (es decir, principalmente de Angola) fue fijada provisionalmente en 25.000 toneladas (Decreto-Ley 44.507, de 14 de agosto de 1962). Desde entonces, esa cantidad ha quedado establecida como mínima anual y toda necesidad en exceso de ella ha de determinarse cada año (Orden 20.112, de 12 de octubre de 1963).

Producción, consumo y exportaciones

175. No se dispone de datos fidedignos sobre la producción total de maíz, que se calcula en unas 400.000 toneladas, pero las exportaciones oscilan generalmente entre el 33% y el 25% de esta cantidad.

176. Como se ha descrito anteriormente, el maíz angolano sólo puede ser exportado al extranjero una vez satisfechas las necesidades del Portugal y de los demás territorios de ultramar. Aunque en 1961 se fijó en 25.000 toneladas la cuota mínima anual de maíz que debe ser suministrada al Portugal por Angola, en años recientes los suministros se han aproximado, por lo general, al doble — o aún más — de dicha cantidad; en 1961 alcanzó a 49.000 toneladas (o sea el 30%), a 56.000 toneladas (48%) en 1962; 79.000 (92%) en 1963; 71.000 toneladas (68%) en 1964.

177. Las exportaciones de maíz a los demás Territorios de Ultramar también dependen de las necesidades de éstos y fluctúan de un año a otro. Desde 1957 hasta 1960 Mozambique recibió por término medio el 10% de las exportaciones angolanas de maíz, Cabo Verde el 5% y São Tomé y Príncipe cerca del 2% (cuadro 16).

Evolución reciente

178. El estancamiento del sector agrícola tradicional fue puesto de relieve en el Plan de Desarrollo de Transición para 1965-1967 (*Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*). Las estadísticas demostraron, en particular, que durante el período transcurrido desde 1950 habían declinado en general las exportaciones

de productos africanos tradicionalmente cultivados. Como se señaló anteriormente, las exportaciones de maíz alcanzaron la cifra máxima de 190.000 toneladas en 1950; las de frijol, 28.000 toneladas en 1950; las de arroz, 8.000 toneladas en 1952, y las de maní, 4.000 toneladas en 1949. En el informe sobre el Plan de Desarrollo de Transición se expresó la opinión de que, si bien esta declinación de las exportaciones de cultivos tradicionales se debía en parte al aumento del consumo y elaboración locales (como por ejemplo en lo referente al maní) también reflejaba en gran medida la falta de interés de los productores, que obedecía a factores diversos, el más importante de los cuales era el bajo precio de compra. A fin de estimular las exportaciones se propuso que: a) se aumentase el precio pagado a los agricultores, b) se redujeran los impuestos y derechos pagados sobre el maíz y otros cultivos africanos y c) se facilitasen mejores instalaciones de almacenamiento a fin de reducir las pérdidas^{xx}.

179. Según datos oficiales, los gravámenes aplicados en 1965 al maíz exportado por Angola consistía en 17 centavos por cada escudo abonado al productor (Instrumento legislativo 3.569, de 31 de julio de 1965)^{xx}. En 1964 el Gremio compró 153.000 toneladas y exportó 104.500 toneladas por valor de 172.200.000 escudos. Suponiendo que el precio de compra fuese de un escudo por kilogramo, los gravámenes totales, a razón de 17 centavos por escudo, hubiesen ascendido a 17.800.000 escudos.

180. En julio de 1965, previendo una reducción de los ingresos resultante de la revisión de los gravámenes aplicados a la exportación de maíz y otros productos africanos tradicionalmente cultivados en general, el Gobierno de Angola decidió compensar la pérdida aumentando diversos impuestos al consumo de artículos de lujo e imponiendo gravámenes especiales a las exportaciones de madera, aceite de palma, café y sisal. No obstante, a raíz de ciertas dificultades especiales surgidas al respecto, en septiembre se procedió a una revisión de los impuestos al consumo y se derogaron los impuestos especiales aplicados a otras exportaciones agrícolas (Instrumento legislativo 3.580, de 30 de septiembre).

181. En mayo de 1966, para que los productores de maíz pudieran obtener mayores utilidades, el Gobierno volvió a aumentar el precio C.I.F. Lisboa, lo que llevó el aumento total desde 1964 a 200 escudos por tonelada (la tonelada de maíz de tipo 3, por ejemplo, se cotiza actualmente a 1.450 escudos). Al mismo tiempo, los gravámenes anteriores aplicados al maíz han quedado reducidos a un derecho único del 5% sobre el valor en aduana del maíz exportado, y los precios de diversas calidades de maíz fueron aumentados en 10 centavos por kilogramo.

^{xx} Portugal. Presidência do Conselho. *Projecto de Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967*, vol. II, Lisboa, 1964, pág. 161.

^{xx} Con arreglo a un despacho del Departamento de Comercio de Lisboa, de 6 de abril de 1965 (*Diário do Governo*, Serie I, No. 78), los gravámenes aplicados al maíz exportado por Angola se redujeron al nivel existente antes del establecimiento del Instituto de Cereales, que era de 15 centavos por kilogramo exportado.

CUADRO 16

ANGOLA: EXPORTACIONES DE MAÍZ Y DESTINO DE LAS MISMAS

Año	Exportaciones			Principales puntos de destino				
	Miles de toneladas	Millones de escudos	Porcentaje del valor total de las exportaciones	Portugal	Otros Territorios de Ultramar	(Porcentajes del volumen exportado) República Federal de Alemania	Bélgica-Luxemburgo	Países Bajos
1955	53,5	86,9	3,09	39,29	9,19	16,59	24,88	0,62
1956	130,7	191,9	5,83	19,97	4,66	15,58	34,95	24,33
1957	31,0	42,6	1,27	64,29	25,92	0,32	0,32	0,32
1958	167,8	218,4	5,92	15,20	13,41	21,43	10,70	3,30
1959	149,2	215,0	5,99	25,21	18,20	15,58	2,04	8,51
1960	117,1	165,0	4,63	17,42	27,30	30,02
1961	161,6	224,8	5,80	30,32	6,62	3,09	0,86	...
1962	116,7	151,7	3,56	47,72	8,90	0,19	2,03	...
1963	86,2	124,5	2,66	91,91	6,41
1964	104,5	172,2	2,93	67,73	16,14	—	—	—

Maíz: Porcentaje del total de las exportaciones a otros Territorios de Ultramar

Año	Cabo Verde	Sao Tomé y Príncipe	Mozambique
1955	1,65	6,69	0,85
1956	2,12	2,54	...
1957	6,37	10,00	9,55
1958	1,18	1,70	10,54
1959	4,78	2,26	11,16
1960	15,32	3,22	8,76
1961	4,76	1,58	0,28
1962	7,11	1,79	...
1963	4,76	1,64	0,01
1964	6,16	1,36	8,61

Fuente: Todos los datos, salvo los de la columna 3 y los correspondientes a Angola para 1964, *Comércio Externo*. La columna 3 se calculó con cifras procedentes de Angola, *Comércio Externo*. Los datos correspondientes a 1964 procedente del Banco de Angola, *Relatório e Contas*.

CUADRO 17

ANGOLA: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, 1955-1964
(Toneladas métricas)

Año	Café	Sisal	Azúcar	Algodón en rama	Maíz	Mandioca (crueira)	Frijol	Nuez de coco	Aceite de palma	Tabaco ^a
1955	36.948	40.716	30.567	6.266	53.533	24.845	12.311	10.307	8.294	517
1956	66.543	37.283	31.789	5.908	130.721	34.275	17.796	9.384	8.790	628
1957	72.225	46.414	40.696	7.363	30.694	24.397	12.554	12.615	9.128	591
1958	77.318	51.870	33.998	5.033	167.821	35.710	8.864	13.736	9.041	259
1959	88.999	53.539	29.872	6.356	149.184	35.702	10.806	7.523	8.747	488
1960	87.217	57.941	46.899	8.894	117.112	58.421	11.789	5.181	13.004	1.010
1961	118.122	58.900	36.615	4.120	161.585	57.365	9.492	10.214	12.582	1.065
1962	156.887	68.856	36.491	5.712	116.681	58.041	10.162	11.610	12.595	947
1963	136.437	61.947	23.849	4.286	86.189	24.378	11.009	18.001	14.877	1.468
1964	138.700	57.228	24.609	3.194	104.475	47.435	4.026	16.693	17.809 ^b	1.850

Fuentes: 1955-1963, Angola, *Comércio Externo*. 1964, Angola, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

^a Incluye tabaco manufacturado y sin manufacturar.

^b Incluye aceite de palma refinado.

CUADRO 18

ANGOLA: PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES QUE
CORRESPONDIÓ A LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 1955-1964

Año	Total de las exportaciones (Miles de escudos)	Café %	Sisal %	Azúcar %	Algodón en rama %	Maíz %	Mandioca (crueira) %	Frijol %	Nuez de coco	Aceite de palma %	Tabaco ^a %
1955	2.804.665	30,50	6,96	2,96	3,32	3,10	1,45	1,08	1,21	1,52	0,25
1956	3.289.026	37,78	5,55	2,57	2,86	5,83	1,75	1,05	0,94	1,41	0,23
1957	3.362.763	42,24	5,65	3,10	3,70	1,27	1,24	0,73	1,22	1,46	0,26
1958	3.688.516	40,82	5,80	2,38	2,30	5,92	1,48	0,62	1,27	1,35	0,19
1959	3.587.418	38,68	8,07	2,17	2,92	5,83	1,55	0,94	0,82	1,36	0,26
1960	3.565.492	35,45	10,53	3,48	4,11	4,63	2,18	0,94	0,62	2,00	0,45
1961	3.874.116	35,86	8,16	2,54	1,78	5,80	2,32	0,74	0,85	1,78	0,43
1962	4.264.294	43,71	9,58	2,34	2,32	3,56	2,58	0,69	0,84	1,40	0,38
1963	4.683.873	40,45	12,33	1,28	1,64	2,66	0,91	0,71	1,34	1,61	0,59
1964	5.867.713	48,73	8,17	1,23	0,92	2,93	1,32	0,21	1,06	1,39 ^b	0,55

Fuentes: 1955-1963, Angola, *Comércio Externo*. 1964, Angola, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

^a Incluye tabaco manufacturado y sin manufacturar.

^b Incluye aceite de palma refinado.

APENDICE III

I. EXPOSICIÓN GENERAL

Industrias agropecuarias y de transformación
en Mozambique

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
I. EXPOSICIÓN GENERAL	
A. Función de la agricultura en la economía del Territorio	1-8
B. Estructura de la producción	9-17
II. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS	
A. Algodón	18-45
B. Azúcar	46-91
C. Anacardo	92-132
D. Copra	133-169
E. Sisal	170-198
F. Té	199-234

Cuadros

	Página
1. Mozambique: Explotaciones agrícolas no africanas, 1960-1961	461
2. Mozambique: Producción de cultivos comerciales, 1950-1951 y 1960-1961	462
3. Mozambique: Producción africana de semilla de algodón	466
4. Mozambique: Producción, consumo local y exportaciones de algodón en rama	466
5. Mozambique: Producción local e importación de textiles de algodón	467
6. Compañías azucareras de Mozambique: superficie cultivada, capacidad de las centrales azucareras y producción, 1960-1961	469
7. Mozambique: Cuotas de exportación de azúcar a Portugal, por compañías	470
8. Mozambique: Producción de azúcar	471
9. Mozambique — Azúcar: Consumo local, exportaciones y principales destinos, 1955-1964	471
10. Influencia de la industrialización en el valor de las exportaciones de anacardo ..	474
11. Mozambique: Producción de almendra descascarada y extracto de cáscara de anacardo	476
12. Mozambique: Exportaciones de almendra descascarada y de extracto de cáscara de anacardo	477
13. Mozambique — Anacardo: Exportaciones y principales lugares de destino, 1955-1964	477
14. Producción de copra	481
15. Mozambique — Copra y aceite de copra: exportaciones y principales países de destino, 1955-1964	481
16. Sisal: Precios medios f.o.b. de las exportaciones	483
17. Mozambique — Sisal: Exportaciones y principales países de destino, 1955-1964..	484
18. Mozambique: Empresas productoras de té, su ubicación y producción, 1962	485
19. Mozambique — Té: Exportaciones y principales países de destino, 1955-1964	487
20. Mozambique: Exportaciones agrícolas, 1955-1964	488
21. Mozambique: Porcentaje correspondiente a las exportaciones agrícolas en el valor total de las exportaciones, 1955-1964	488

A. Función de la agricultura en la economía del Territorio

1. Mozambique depende en gran medida de su situación geográfica respecto de las regiones altamente productivas del interior, para las que constituye el principal acceso al mar. Por consiguiente, el funcionamiento de los servicios portuarios, de ferrocarril y afines de que hacen uso para su comercio de tránsito los países vecinos es una rama importante de la actividad económica. De este sector obtiene casi una cuarta parte de sus ingresos en divisas y una buena parte de los ingresos públicos. El Territorio recibe también otros ingresos invisibles en forma de remesas y salarios de los trabajadores migrantes en Sudáfrica y Rhodesia del Sur y de la creciente industria del turismo.

2. Los ingresos invisibles contribuyen a compensar el déficit crónico de la balanza comercial del Territorio, en la que se refleja la actual debilidad de la economía interna. En efecto, la producción de minerales y la industria manufacturera son relativamente pequeñas, si bien ambos sectores están creciendo en la actualidad, por lo cual la economía se basa principalmente en la agricultura y en el cultivo de productos básicos agrícolas para la exportación en bruto o semielaborados. Los productos vegetales constituyen más del 80% del valor total de las exportaciones y casi el 93% de la población activa africana está constituida por trabajadores agrícolas o agricultores, principalmente en el sector de subsistencia. Análogamente, casi el 60% de la inversión industrial privada se ha destinado a las industrias de elaboración de productos agrícolas. Según se explica en el estudio anterior sobre organización y política económicas, el desarrollo de la industria manufacturera se ha visto restringido por la política oficial, y en menor grado, por el reducido mercado interno y la falta de recursos financieros.

3. Los cultivos de exportación más importantes que se producen en Mozambique son el algodón, el azúcar y la nuez de anacardo. Hasta hace poco el algodón y el azúcar eran los productos de exportación principales, y se destinaban a satisfacer las necesidades de Portugal, pero a partir de 1957 las exportaciones de nuez de anacardo se han triplicado casi en valor y se han convertido en el principal cultivo de exportación del Territorio. En 1964 el algodón en rama y la nuez de anacardo representaron en conjunto más de una tercera parte del valor de las exportaciones visibles de Mozambique, mientras que el azúcar descendió temporalmente al cuarto lugar, aportando únicamente el 8,1% a los ingresos de exportación, situación que tal vez cambie muy pronto cuando terminen los proyectos actuales de incremento de la producción de azúcar (véase la sección II B *infra*). De menor importancia son el sisal, la copra y el té, que en 1964 equivalieron respectivamente el 9%, el 6,9% y el 5,4% de las exportaciones. Además de estos seis cultivos, que representan en total el 68% de los ingresos de exportación del Territorio, hay otros productos agrícolas, como los aceites vegetales y las tortas oleaginosas, las frutas, el tabaco, el arroz, el café y los productos de huerta, que constituyen aproximadamente el 7% del valor de las exportaciones.

4. Excepto en el caso de la nuez de anacardo, de la que Mozambique se ha convertido en los últimos años en el principal productor, ya que exporta casi la mitad del total de las exportaciones mundiales de nuez con cáscara, el Territorio no es productor principal mundial de ningún otro cultivo. Ocupa el quinto lugar entre los países africanos en la producción de algodón y aunque posee la mayor plantación de copra del mundo, su producción de copra representa sólo el 1% de la producción mundial, y sólo produce el 0,6% de la producción mundial de azúcar.

5. Casi una tercera parte de las exportaciones agrícolas van a Portugal o a otros territorios bajo administración portuguesa, incluido prácticamente todo el algodón, el azúcar y los aceites vegetales, que se exportan con un sistema de cuotas obligatorias y a precios fijos. Los otros cultivos importantes se exportan principalmente a países extranjeros, enviándose en su mayor parte la nuez de anacardo a la India y a los Estados Unidos de América, el sisal a Francia y a los Estados

Unidos de América, la copra a España, Noruega, Israel y Dinamarca y el té al Reino Unido.

6. Las exportaciones agrícolas de Mozambique están sometidas a diversas formas de fiscalización oficial. Por lo que hace al algodón y al azúcar la política oficial ha consistido en dirigir prácticamente la totalidad de las exportaciones a Portugal, a precios reglamentados oficialmente, con objeto de aliviar la situación de la balanza de pagos de Portugal y, en cuanto al algodón, de facilitar un suministro seguro de materia prima para la industria textil metropolitana a precios que durante muchos años han sido inferiores a los corrientes en los mercados mundiales. Se aplican controles análogos a las semillas oleaginosas, aunque en la mayor parte de los casos se da prioridad a los molinos de aceite del Territorio. Otros cultivos están sujetos a distintas reglamentaciones y todos ellos al control de divisas.

7. Los impuestos especiales y de exportación sobre los productos agrícolas contribuyen al ingreso general del Territorio y a la financiación del desarrollo de la agricultura y de sectores afines. Así, en lo que se refiere al algodón, los impuestos especiales, que oscilan del 3% al 5% *ad valorem* sobre el algodón en rama exportado, y el 35% sobre toda la semilla de algodón que se produce, se emplean para costear los gastos del Instituto del Algodón destinados al desarrollo y reglamentación de la industria algodonera y al desarrollo general de la agricultura, incluida la colonización en las zonas productoras de algodón. En el caso del azúcar, se aplica además del impuesto de exportación normal del 1% *ad valorem* una sobretasa de 10 centavos por kilogramo. Los cultivos que se exportan a países extranjeros pagan por lo general una sobretasa y, cuando se estima oportuno, un impuesto adicional, *imposto de sobrevalorização*, calculado sobre la base del aumento de precio respecto del que regía en 1949. En cuanto a la nuez de anacardo sin cáscara, los impuestos especiales de exportación fueron en julio de 1965 una sobretasa del 2,5% *ad valorem* y un impuesto de *sobrevalorização* de 479 escudos a 551 escudos por tonelada, según el distrito de origen. En lo relativo a la copra y al sisal los impuestos han variado, principalmente con arreglo a la situación del mercado de exportación. En la actualidad, el sisal está sujeto únicamente al impuesto normal del 1% del valor, más una sobretasa de 5%.

8. Sin embargo, la fuente principal de ingresos públicos de Mozambique siguen siendo los puertos y ferrocarriles, que, juntamente con otros servicios autónomos, produjeron 1.897 millones de escudos de beneficios en 1965. En cambio, los derechos de importación sólo aportaron 68.400.000 escudos, el *imposto de sobrevalorização* 11.800.000 escudos y el impuesto sobre el algodón 33.700.000 escudos.

B. Estructura de la producción

9. Con una superficie equivalente a unas siete veces la extensión de Portugal y considerables variaciones de clima y topografía que permiten el cultivo de productos de la zona tropical y de la zona templada, el potencial agrícola de Mozambique está todavía sin explotar en su mayor parte. Aunque algunas zonas, concretamente, la región del interior situada entre los ríos Limpopo y Save, la parte meridional del distrito de Tete y ciertas partes del distrito de Nyassa, son áridas y de suelo pobre, se estima que aproximadamente una tercera parte del total del Territorio es cultivable. De esa extensión sólo se cultiva algo menos del 3%.

10. Es difícil calcular la superficie exacta de tierras cultivadas, principalmente porque gran parte de la agricultura africana consiste todavía en cultivos migratorios. Según cálculos poco firmes se cree que los africanos cultivan unas 500.000 hectáreas, de las cuales la mitad se dedican a cultivos de subsistencia como el sorgo, el maíz, el mijo, la mandioca, los frijoles y diversas verduras. Entre los cultivos comerciales, los agricultores africanos producen casi la totalidad de la cosecha de algodón, la mayor parte del arroz, sésamo y cacahuete. Producen también, principalmente en árboles y plantas silvestres, casi la mitad de la cosecha de nueces de anacardo, alrededor del 29% de la copra del Territorio, así como semillas de ricino, mafurra y corteza de mangle. Estos cultivos comerciales se venden a los mayoristas en mercados controlados y en algunos casos a precios fijados oficialmente.

11. La mayor parte de los cultivos importantes de exportación están en realidad controlados por capital no africano, puesto que se producen en fincas y plantaciones propiedad de europeos o las compran no africanos que poseen las fábricas de elaboración. Algunos cultivos comerciales, especialmente el azúcar, el sisal, el yute, la copra, el té, el tabaco, el maíz, los frutos cítricos y las bananas se cultivan principal o exclusivamente en plantaciones y fincas administradas por europeos con mano de obra africana. Asimismo las nueces de anacardo y el arroz se cultivan cada vez en mayor proporción en explotaciones agrícolas de europeos. En 1961, último año para el que se dispone de información, había 2.707 explotaciones no africanas, con un total de 1.700.000 hectáreas, de las cuales sin embargo sólo 365.249 estaban en cultivo. Casi el 85% de las explotaciones agrícolas eran propiedad de agricultores privados y además había trece grandes compañías dedicadas fundamentalmente a cultivos de plantación como el azúcar, el sisal, la copra, el yute y el té, que requieren inversiones de capital importantes. En el cuadro 1 se indica el número y distribución de las explotaciones agrícolas no africanas por distritos en 1961, y se da información acerca de los cambios más recientes en las distintas secciones relativas a los principales cultivos comerciales.

CUADRO 1

MOZAMBIQUE: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS NO AFRICANAS, 1960-1961

Distrito	Número de fincas	Explotaciones			Total de la mano de obra
		Extensión total (hectáreas)	Extensión media (hectáreas)	Superficie cultivada (hectáreas)	
Lourenço Marques	404	201.440	499	34.061	17.000
Gaza	830	171.282	206	18.046	8.300
Inhambane	165	112.829	684	15.567	1.652
Manica e Sofala	340	526.919	1.550	56.266	25.268
Tete	31	7.446	240	1.721	758
Zambezia	314	315.210	1.004	110.425	57.980
Mozambique	480	303.949	633	113.225	23.222
Cabo Delgado	103	47.449	4.607	23.897	4.374
Nyassa	40	17.199	430	1.038	927
TOTAL	2.707	1.703.723	630	374.246	139.481

Fuente: Mozambique, *Estatística Agrícola*, 1961.

12. En comparación con los diez años anteriores, estas cifras representan un aumento de casi 30% de la superficie total de las exportaciones agrícolas, y la proporción de tierras cultivadas se mantiene a un nivel constante del 22%. Los mayores aumentos relativos se produjeron en los distritos de Manica e Sofala, Lourenço Marques y Nyassa, donde la extensión de las explotaciones se elevó a más del doble.

13. Conviene indicar que de un total de 2.423 explotaciones agrícolas que existían en 1960, 2.246 eran propiedad de portugueses. Del resto, 45 eran propiedad de indios, 32 de alemanes, incluidas varias plantaciones de sisal, 26 de griegos y 14 de compañías británicas, entre ellas la mayor compañía azucarera.

14. La principal región agrícola se halla en la zona norte del río Zambeze y comprende la mayor parte de los distritos de Zambézia, Mozambique y Cabo Delgado. Insuficientemente explotada durante largo tiempo, a excepción de las plantaciones de sisal y de copra situadas a lo largo de la costa, produce ahora casi tres cuartas partes del algodón del Territorio, cuatro quintas partes de las ventas de nueces de anacardo y de cacahuete, la mayor parte de la copra y del sisal, buena parte del arroz y del tabaco y todo el té, además de otros diversos cultivos como plátanos, yute y verduras. Las zonas principales de cultivo son: a) un cinturón costero de poca altura que es la principal zona de producción de copra, sisal y algodón; b) las mesetas del interior, sobre todo en los alrededores de Milange, Tacuane, Gurue y Malema, donde están situadas las principales plantaciones de té y de tabaco; y c) el interior del distrito de Cabo Delgado, donde además de la zona costera está situada la principal zona de producción de nueces de anacardo. En el resto del país, sobre todo en el distrito de Nyassa, hay grandes extensiones de tierra no explotada, a causa de la falta de comunicaciones y de la pobreza y aridez del suelo. El distrito de Tete está también relativamente sin explotar, a excepción de las zonas fronterizas con Rhodesia del Sur y la Meseta de Angónia en el norte, que es sobre todo una zona ganadera*.

* Aunque la cabaña nacional cuenta con 1.100.000 cabezas de ganado vacuno, la producción está destinada casi totalmente al mercado interno. La ganadería está restringida a las zonas libres de la mosca tsé-tsé y, excepción hecha de la región de Angónia, la llevan a cabo sobre todo las grandes empresas agrícolas para alimentar a sus propios trabajadores.

15. En la región central, que comprende el distrito de Manica e Sofala, la agricultura se concentra sobre todo en los ricos suelos de aluvión de los valles y en las mesetas del interior del *concelho* de Chimoio, vecino al ferrocarril de Beira a Salisbury. Los valles de los ríos Zambeze y Buzi son en la actualidad el centro de la producción de azúcar, y el kenaf se cultiva industrialmente en el valle del río Púngué, en el que se proyecta introducir también el cultivo del azúcar. Además, en los valles del Zambeze, el Púngué y el Revué y en la meseta de Chimoio, en los alrededores de Vila Pery, están en marcha planes de colonización basados en el cultivo del maíz, el tabaco, el algodón y el arroz. El resto del distrito de Manica e Sofala cuenta con escasa población y está poco desarrollado, a pesar de que cuenta con unos 6 millones de hectáreas cultivables.

16. En el sur de Mozambique, que comprende la zona situada al sur del río Save, se encuentran las zonas agrícolas más fértiles, en los valles del Limpopo, el Incomati, el Umbeluzi y el Maputo. En las cercanías de Lourenço Marques se produce leche y hortalizas y se cultiva el arroz y el algodón, y en el valle del Incomati se producen azúcar y plátanos. Los asentamientos de europeos y africanos en el valle del Limpopo (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II) son productores importantes de cultivos para la alimentación y en la zona hay también una ganadería y producción de nueces de anacardo considerables.

17. Sólo se poseen estadísticas completas de producción respecto de los cultivos "organizados" obtenidos en explotaciones no africanas. Para la producción africana, sólo se dispone de datos sobre las cantidades vendidas a los comerciantes o en mercados autorizados y no comprenden la producción de subsistencia. Sin embargo, como las ventas de la mayor parte de los cultivos no africanos han de hacerse en mercados autorizados, estas cifras dan probablemente una idea bastante exacta del volumen de cultivos comerciales producidos por africanos. En el cuadro 2A, se indica la producción de las explotaciones no africanas durante los años 1950-1951 y 1960-1961, y de los datos que contiene se desprende que el valor de la producción casi se duplicó en este decenio y que los aumentos proporcionalmente mayores fueron los del azúcar, el arroz y el algodón. En el cuadro 2B se dan datos comparables para los cultivos comprados a africanos y se observa que el aumento en valor ha sido únicamente del 20%.

CUADRO 2

MOZAMBIQUE: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS COMERCIALES, 1950-1951 Y 1960-1961

A. Cultivos de explotaciones no africanas

	Superficie cultivada (hectáreas)		Producción (toneladas métricas)		Valor (en millares de escudos)	
	1950/51	1960/61	1950/51	1960/61	1950/51	1960/61
Azúcar de caña	24.900	38.578	84.884	165.134	160.414	482.065
Té	10.729	14.795	2.970	8.099	45.193	149.140
Sisal (fibra)	53.701	56.973	18.888	28.252	150.804	138.438
Copra	69.037	82.622	25.803	32.806	85.924	87.816
Arroz	2.036	16.435	1.789	32.261	3.313	70.386
Tabaco	1.606	3.979	908	2.100	12.433	31.268
Frutas	8.747	10.705	31.843	31.080	25.726	29.310
Maíz	38.687	29.379	23.871	23.447	34.061	28.859
Patatas	1.010	2.570	4.201	10.040	8.895	24.679
Horticultura	1.065	1.924	8.545	10.570	9.158	13.158
Anacardo (nueces) ...	37.026	59.937	3.320	5.829	7.811	12.232
Algodón (semilla) ...	830	3.286	190	1.110	216	3.450
Otros	43.500	53.060	24.694	77.136
TOTAL	292.874	374.243	568.642	1.147.937

B. Cultivos comprados a africanos

Cultivo	Producción (toneladas métricas)		Valor (en millares de escudos)	
	1951	1961	1951	1961
Arroz	12.896	18.654	12.298	25.276
Sorgo	7.072	4.129	7.182	4.712
Maíz	31.001	42.731	31.723	40.890
Trigo	535	4.231	1.072	10.577
Cacahuets	15.157	17.111	21.699	31.374
Nueces de anacardo	38.313	34.563	81.879	59.951
Copra	13.696	9.958	62.626	26.587
Semilla de algodón	89.316	110.651	236.886	379.960
Mandioca	30.722	12.341	24.198	8.658
Otros	11.645	8.110	24.117	14.761
TOTAL	250.353	262.479	503.680	602.746

Fuente: Mozambique, *Estatística Agrícola*, 1951 y 1961.

II. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

A. Algodón

Generalidades

18. Entre los productos que se cultivan en Mozambique con fines comerciales el algodón es probablemente uno de los más antiguos, pues fue introducido por mercaderes árabes mucho antes de la era colonial. Sin embargo, por diversos motivos el Territorio no llegó a convertirse en productor importante hasta después de la primera guerra mundial, cuando Portugal, ante la necesidad de conservar divisas, estableció el régimen especial — que se describe en el estudio precedente — con el fin de abastecer su industria textil. Entre 1926 y 1932 el ritmo de desarrollo fue lento, a causa de las repercusiones de la depresión económica mundial y de que el Territorio carecía de técnicos agrícolas calificados, pero a partir de 1936 la producción fue aumentando rápidamente y, para 1942, Mozambique ya había quedado establecido como principal fuente de abastecimiento de Portugal. En 1961, el Territorio suministró más del 62% del volumen de las importaciones de algodón de Portugal, lo que representa aproximadamente el 3,7% del valor total de las importaciones portuguesas.

19. La producción de Mozambique es pequeña comparada con la de los principales países productores, por ejemplo los Estados Unidos de América o la India. Durante el trienio de 1960/1961 a 1962/1963, la proporción que le correspondió en la producción mundial osciló entre el 0,3% y el 0,4% solamente y representó menos del 5,4% de la producción de toda África. No obstante, en función de la economía nacional de Mozambique, el algodón desempeña un papel de gran importancia. Durante veinte años hasta 1964 — cuando por primera vez fue sobrepasado por las exportaciones de anacardo — constituyó el principal producto de exportación del Territorio, y en años recientes aportó alrededor del 30% del valor de todas las exportaciones visibles, ocupándose de su cultivo, por término medio, más de 500.000 agricultores africanos.

20. El algodón se cultiva en casi todo Mozambique, salvo las tierras altas del interior y los pantanos del litoral. La región principal se encuentra al norte del río Zambeze y abarca los distritos de Cabo Delgado, Nyassa, Mozambique y Zambezia, que en conjunto producen más de los dos tercios del total. Otras zonas importantes son los valles de los ríos Limpopo y Umbeluzi en el sur, la zona litoral que se extiende hacia el norte desde el Limpopo hasta Vilanculos y, en Manica e Sofala, las tierras de la altiplanicie de Gorongosa.

21. El algodón cultivado es una variedad de fibra larga (28 a 34mm.). La mayor parte de la cosecha se exporta en rama (desmotado) principalmente a Portugal, aunque una pequeña parte (que en 1960 alcanzó el 4%) se utiliza localmente para la fabricación de hilo de algodón y textiles. Tam-

bién se transforman en el país subproductos del algodón como aceite y semillas para la exportación.

Organización de la producción

22. El algodón es cultivado predominantemente por africanos en pequeñas parcelas de una o más hectáreas, según el tamaño de la familia. La producción en mayor escala, por europeos y otros extranjeros, es poco importante. En 1960-1961, último año para el cual se dispone de estadísticas detalladas, sólo había 95 plantaciones cultivadas por no africanos, los cultivos algodóneros abarcaban en conjunto una superficie de 2.649 hectáreas y producían solamente 1.010 toneladas de algodón en bruto, o sea menos del 1% de la producción del Territorio. Una pequeña cantidad de algodón de alta calidad se cultiva en regadío por colonos europeos establecidos en la colonia del valle del Limpopo; además, se tiene el propósito de que el algodón de regadío constituya uno de los cultivos básicos del plan de colonización de 120.000 hectáreas en el valle del Zambeze, que es parte del Plan de Desarrollo de Transición para 1965-1967 (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II). No obstante, la mayor parte del algodón la producen africanos, en secano.

23. El régimen especial que se aplica al algodón cultivado por africanos se ha descrito en un estudio previo. Con anterioridad a 1961, el régimen consistía en cultivos dirigidos, bajo la supervisión de los representantes de las empresas concesionarias, con el apoyo de los servicios administrativos locales y con arreglo a las orientaciones generales de la Junta de Exportación del Algodón. Esta designaba las zonas que debían cultivarse y determinaba la superficie de las que, según se preveía, debían ser cultivadas por africanos de la zona algodонера. De acuerdo con las instrucciones generales (*Bases para a Campanha Algodoeira*) redactadas por la Junta y aprobadas por el Gobernador General en 1948, se designaba como *agricultores* a varones africanos, físicamente sanos, de 18 a 55 años de edad, previéndose que cada uno de ellos debía cultivar una hectárea de algodón, más media hectárea por cada esposa que tuviera además de la primera, y una superficie equivalente de cultivos para la alimentación. Las mujeres solteras de 18 a 45 años y físicamente sanas, así como los hombres entre los 56 y los 60 años de edad, eran denominados cultivadores de algodón, y habían de cultivar media hectárea de algodón y media de productos alimenticios.

24. Como se ha explicado en el estudio anterior, los cultivadores africanos se encontraban bajo la supervisión de los representantes de los concesionarios, quienes también distribuían semillas y herramientas. Dentro de las zonas algodonerías, las empresas concesionarias, asignaban las tierras que debían dedicarse al cultivo del algodón, a reserva de la aprobación de la Junta, y de acuerdo con la ley debían agrupar esas zonas de manera que la maquinaria pudiese ser utilizada en común y que el cultivo del algodón se equilibrase con otros destinados a la alimentación. Sin embargo, según un informe, los

esfuerzos por reagrupar los productores provocaron quejas de los cultivadores africanos y, en muchos casos, fueron abandonados^b.

25. El número de africanos registrados como cultivadores de algodón alcanzó en 1944 la cifra máxima de 791.000^c, cultivaban una superficie de 267.000 hectáreas y produjeron aproximadamente 64.000 toneladas de algodón en bruto durante el año. Sin embargo, la rápida expansión del cultivo del algodón, unida a otros factores, ya había producido en las zonas algodonerías graves escaseces de alimentos, que en ciertas ocasiones alcanzaron proporciones de crisis en algunas de las principales zonas algodonerías del norte. En consecuencia, a partir de los primeros años del decenio 1940/49 se procuró eliminar las zonas marginales y concentrar los trabajos en aumentar el rendimiento, en tanto que, con arreglo a la legislación de 1946, se impuso a los concesionarios la nueva responsabilidad de supervisar los cultivos destinados a la alimentación dentro de los perímetros de sus concesiones. Como resultado fue disminuyendo el número de plantadores hasta que, para 1949, quedó casi estabilizado en unos 520.000. En 1960, que fue un año de producción máxima, 529.000 plantadores africanos cultivaron una superficie de 297.000 hectáreas; o sea sólo 37.000 hectáreas más que en 1944. Con todo, su producción combinada alcanzó a 139.740 toneladas; a saber, más del doble que la cifra anterior.

26. Con el aumento de la producción de algodón, la superficie controlada por algunas empresas concesionarias alcanzó proporciones inmensas; por ejemplo, una de ellas (véase más adelante) llegó a tener veinte y tres concesiones que abarcaban aproximadamente la mitad de dos distritos administrativos. Según un informe^d, la posesión de derechos de monopolio en zonas tan extensas originó muchas quejas de que, pese a las salvaguardias legales, las empresas concesionarias podían ejercer presión sobre africanos para obligarlos a cultivar algodón, pagándoles precios inferiores a los mínimos oficiales.

27. La legislación de 1961 y 1963 puso fin al cultivo obligatorio y a toda intervención administrativa en la explotación algodonería. Además, dispuso la abolición progresiva — que deberá quedar terminada el 31 de agosto de 1966 — de las concesiones en exclusiva. El decreto de 1963, que disponía la abolición de las concesiones, separó de hecho las tres funciones que los concesionarios desempeñaban anteriormente, a saber: a) supervisión de los cultivos, b) compra del algodón a los cultivadores, y c) desmotado y transformación. La primera de estas funciones, incluso la selección de tierras, la supervisión de los cultivadores y la distribución de semillas y herramientas, quedó bajo la exclusiva responsabilidad del Instituto, en tanto que el derecho a comprar algodón en un mercado concreto debía adjudicarse por medio de una licitación al comerciante autorizado que se comprometiese a pagar los precios más altos por encima de los mínimos oficiales; en caso de que no se presentase ningún comerciante, el propio Instituto adquiriría el algodón a los precios oficiales. Las antiguas empresas concesionarias continuaban desmotando y transformando el algodón, pero lo harían en representación de comerciantes o del Instituto y cobrarían una comisión fijada oficialmente. Desde luego, las disposiciones no impedían que una empresa propietaria de una planta de desmotado fuese a la vez comerciante autorizado.

28. Durante el presente período de transición — es decir, hasta el 31 de agosto de 1966, fecha en que todas quedarán rescindidas — no se sabe qué concesiones se encuentran todavía en vigor y qué otras han sido abandonadas. Sin embargo, parece que fueron muchos los concesionarios que renunciaron a ellas después de 1963, año que, a causa de la sequía, fue extraordinariamente malo para el algodón. Así, un concesionario, la

Companhia de Zambézia, abandonó su concesión en el distrito de Tete después de informar que en 1962-1963 había sufrido una pérdida de explotación neta de más de 4 millones de escudos, debido a que la producción de algodón había disminuido de 1.249 toneladas en 1960 a sólo 340 en 1963.

29. Ofrece otro indicio de la magnitud del cambio un reciente informe según el cual, en 1964, el Instituto del Algodón adquirió el 40% de la cosecha total. Cabe señalar que el Instituto se vio obligado a hacerlo a causa de que en muchos mercados no hubo competencia por parte de compradores autorizados. Según una fuente, la falta de compradores autorizados que hicieran ofertas por la cosecha de 1964 se debió a la resistencia opuesta al nuevo sistema por los antiguos concesionarios.

30. Una vez revisado el régimen del algodón, la atención parece orientarse hacia la intensificación del cultivo, ya sea mediante el riego, como en los planes de colonización de los valles del Limpopo y el Zambeze, o en colonias organizadas para el cultivo de secano. A partir de 1963, el Instituto del Algodón inició la organización de *colonatos* en el distrito de Mozambique, empleando el Fondo de Fomento del Algodón, que se sostiene a base de impuestos, derechos por licencias, y otros ingresos del Instituto, para proporcionar viviendas, tierras despejadas, transportes y parques comunales de maquinaria agrícola. No obstante, para fines de 1965 sólo se habían establecido dos *colonatos* de ese tipo en Muíte y Cabo Antonio (*circunscrição* de Imala).

31. Como se ha dicho, la situación actual no es clara en lo que respecta a las empresas concesionarias. Sin embargo, en 1960 había 12 empresas concesionarias que en conjunto poseían 17 plantas de desmotado y nueve hilanderías subsidiarias que empleaban en total 5.385 personas. La mayor de estas empresas, la Companhia dos Algodões de Moçambique, con un capital registrado de 150 millones de escudos, monopolizaba las compras en 23 zonas que abarcaban aproximadamente la mitad de la superficie de los distritos de Zambézia y Mozambique, y en 1960 adquirió casi la tercera parte de la producción africana total. La segunda en importancia, la Sociedade Agrícola Algodoeira, con un capital registrado de 30 millones de escudos, controlaba nueve zonas algodonerías, con inclusión de todo el distrito de Cabo Delgado, mientras que la Algodoeira do Sul do Save, Lda., controlaba la mayor parte de la producción de los distritos de Inhambane y Gaza. Otras empresas poseían muchas menos concesiones, y algunas, como la Sena Sugar Estates, Ltd. y la Companhia do Buzi (véase la sección B) se dedicaban principalmente a otras actividades. A continuación se presenta una lista de los titulares de concesiones registradas en 1960:

Mozambique — Empresas que en 1960 poseían concesiones de explotación algodonería

<i>Empresa</i>	<i>Distrito</i>
Algodoeira do Sul do Save, Lda.	Gaza e Inhambane
Companhia do Buzi, S. A. R. L.	Manica e Sofala (una zona)
Companhia Nacional Algodoeira	Manica e Sofala
Companhia da Zambézia, S. A. R. L.	Tete (una zona)
Sociedade Algodoeira de Tete, Lda.	Tete
Companhia Agrícola e Comercial Lopes e Irmãos	Zambézia (una zona)
Sena Sugar Estates, Ltd.	Zambézia (dos zonas)
Monteiro e Giro, Lda.	Zambézia (dos zonas)
Companhia dos Algodões de Moçambique	Mozambique, Cabo Delgado y Zambézia (23 zonas)
Companhia Agrícola e Comercial João Ferreira dos Santos	Mozambique (6 zonas)
Sociedade Algodoeira do Nyassa	Nyassa y Mozambique (5 zonas)
Sociedade Agrícola Algodoeira (SAGAL)	Cabo Delgado y Nyassa (10 zonas)

^b Nelson Saraiva Bravo, "A Cultura Algodoeira na Economia do Norte de Moçambique", Junta de Investigações do Ultramar, *Estudos de Ciências Políticas e Sociais*, No. 66 (Lisboa, 1963).

^c Esta cifra se refiere únicamente a los cultivadores registrados, y es muy posible que subestime el número total de africanos — incluso niños — que se dedicaba a esta actividad.

^d Bravo, *op. cit.*

Industria textil algodonera

32. La legislación que rige la fabricación de textiles de algodón en los Territorios de Ultramar se describe en la segunda parte del apéndice I *supra*. Cabe recordar que hasta junio de 1965 el establecimiento de fábricas de textiles de algodón estaba regido por decretos de 1944 y 1945 que limitaban la cantidad de textiles de algodón que cada Territorio podía producir.

33. En 1963 había en Mozambique cinco fábricas de textiles de algodón, tres de las cuales eran pequeñas productoras de artículos destinados al consumo local, en tanto que la cuarta, la Companhia Industrial Algodoeira, que produce exclusivamente vendas y algodón en rama para apósitos, era un poco más grande. En 1960, la producción combinada de estas cuatro empresas se evaluó en 2.300.000 escudos únicamente.

34. La empresa productora de textiles de algodón más importante, con mucho, de Mozambique y Angola es la Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial (SAFC) formada en 1950 (Decreto ley 37.847, de 3 de junio) a raíz de la fusión de dos empresas textiles, la Sociedade Algodoeira de Portugal, de Mozambique, y la Companhia de Fomento Colonial, de Angola. La empresa actual tiene su sede en Portugal, posee una fábrica en Mozambique (Textafrika), otra en Angola (Textang), y pertenece conjuntamente al Gobierno portugués y a intereses privados de la industria textil metropolitana. Su consejo está integrado por A. Magalhães (Presidente), J. Sobral Meireles, J. R. Machado Pinto, A. Pimental y J. C. Barbosa, todos ellos portugueses. La empresa tiene un capital registrado de 200 millones de escudos pero, según se informó, al 31 de diciembre de 1964 el capital efectivamente invertido ascendía a 514.400.000 escudos. Además de sus fábricas de textiles de algodón, la compañía posee intereses que le permiten controlar la Sociedade Hidro-Eléctrica do Revuê que abastece de energía eléctrica a su fábrica de Mozambique (19.500.000 escudos), la Empresa Moçambicana de Malhas, fábrica de artículos de punto establecida en Mozambique (6.800.000 escudos), la Companhia de Seguros Ourique, empresa aseguradora (974.000 escudos), y la Cooperativa dos Produtores e Exportadores de Café, en Angola (10 millones de escudos).

35. La producción de textiles de algodón de la empresa ha ido aumentando rápidamente en años recientes, como lo indica el creciente valor de sus ventas que, para ambas fábricas combinadas, aumentó de 22.500.000 escudos en 1955 a 73 millones en 1960, y se duplicó con creces de 1960 a 1964. Las utilidades netas combinadas de la empresa ascendieron a 12 millones de escudos en 1961 y a 16.100.000 en 1964. Esta última cifra se compone de utilidades por valor de 12.200.000 escudos y 5.200.000 correspondientes a sus operaciones en Mozambique y Angola respectivamente, menos un déficit de 375.000 escudos sufrido en Portugal, donde tiene su sede. En 1964 distribuyó entre los accionistas 10 millones de escudos en forma de un dividendo del 5 por ciento.

36. Las cifras de producción de la empresa correspondientes a 1964 indican que estaba produciendo 18 millones de metros de textiles por año, evaluados en 150 millones de escudos. La mayor parte (aproximadamente el 75%) de la producción total de la empresa procede de la fábrica de Mozambique (Textafrika) situada en la Vila Pery, en el distrito de Manica e Sofala. Según se informó en 1961, esta fábrica estaba equipada con 460 telares automáticos y 14.460 husos y consumía por término medio 2.000 toneladas anuales de algodón en rama (que representan aproximadamente el 5% del volumen exportado). La fábrica produce entre el 40% y el 50% de los textiles de algodón consumidos en Mozambique (véase el cuadro 5). Según el presidente del consejo, en su informe sobre las actividades en 1964, las operaciones de la empresa resultaron afectadas, entre otras cosas, por los elevados precios que había tenido que

pagar por el algodón (a causa de las cuotas de exportación y a que el algodón vendido a la industria local está sujeto a los mismos impuestos que el que se exporta a Portugal) y por el limitado tamaño de los mercados de Angola y Mozambique. En 1960, la fuerza de trabajo de ambas fábricas consistía en 172 europeos y 1.845 africanos, cuyos salarios ascendían, respectivamente, a 7.500.000 escudos y 4.800.000 escudos; los africanos, además de sus salarios recibían alimentos y viviendas. Para 1965, la fuerza de trabajo total había aumentado a 3.000 personas.

37. En 1962 las exportaciones de textiles de algodón se dirigieron casi totalmente a Angola y ascendieron a sólo 29 millones de escudos. El volumen insignificante del algodón exportado se debió aparentemente al límite impuesto a la producción, que fue dejado sin efecto por el decreto de junio de 1965. Durante el mismo año, el Territorio importó — principalmente de Portugal — 3.379 toneladas de textiles evaluadas en 227.100.000 escudos.

Otros subproductos del algodón

38. Con anterioridad a la segunda guerra mundial, la semilla de algodón que no se necesitaba para la siembra era destruida. Sin embargo, durante la última parte del decenio de 1940, el alza de los precios mundiales justificó el costo de las exportaciones y se empezó a exportar semilla, alcanzando en 1949 la cifra máxima de 26.470 toneladas, con un valor de 36.600.000 escudos. A partir de entonces las exportaciones de semilla sin elaborar fueron disminuyendo rápidamente al ir estableciéndose refinerías de aceite locales. En virtud de legislación local promulgada en 1954 (Despacho del 31 de mayo de 1954) no se permite la exportación de semillas de algodón antes que hayan sido cubiertas las cuotas correspondientes para las refinerías de aceite locales.

39. La industria del aceite vegetal incluye tres fábricas que elaboran aceite de semilla de algodón y de otros tipos. Dos de ellas son de propiedad de la Companhia Industrial do Manapo, subsidiaria de la Companhia Industrial Portuguesa, y la tercera a la Moçambique Industrial, S.A.R.L., con un capital registrado de 21 millones de escudos. La mayor parte del aceite de semilla de algodón que se produce — en 1960 ascendió a 6.571 toneladas, con un valor de 57.500.000 escudos — se consume en el Territorio, y sólo se exporta un excedente insignificante. Los residuos de fabricación se venden como forraje. La mayor parte de esta producción se exporta a países de la Europa septentrional, y en 1962 produjo ingresos por 43 millones de escudos.

Función económica del algodón

40. Desde 1926 la producción algodonera de Mozambique ha sido cuidadosamente regulada para atender las necesidades de la industria textil de Portugal. Suministrado a Portugal con arreglo a cuotas obligatorias y producido hasta 1961 a base de cultivos forzados, el algodón ha representado durante los últimos veinte y cinco años el principal producto de exportación de Mozambique y la más importante actividad económica de sus habitantes, ya que ocupa a más de 500.000 productores.

41. El principal período de aumento de la producción data de 1941. Con anterioridad a 1936, la producción africana de semilla de algodón rara vez excedía en ningún año de 4.000 toneladas, y de 1936 a 1940, la producción media algodonera no alcanzó las 20.000 toneladas anuales. No obstante, en 1941 aumentó bruscamente a 51.000 toneladas y a partir de entonces continuó aumentando, salvo en algunos años de mala cosecha, de acuerdo con las siguientes cifras:

CUADRO 3

MOZAMBIQUE: PRODUCCIÓN AFRICANA DE SEMILLA DE ALGODÓN

Año	Producción		Superficie cultivada (millares de hectáreas)	Número de agricultores (millares)
	Volumen (millares de toneladas)	Valor (millones de escudos)		
1941-1950 ^a	64,6	89,3	261	613
1950-1955 ^a	99,6	262,8	266	504
1956	65,2	182,6	293	518
1957	108,2	309,5	300	513
1958	91,5	260,2	301	516
1959	134,9	393,6	312	536
1960	139,7	405,2	297	529
1961	110,1	379,9
1962	120,0

Fuente: Hasta 1960, datos procedentes de la Junta de Exportación del Algodón y, a partir de esa fecha, de *Estatística Agrícola*.

^a Promedio anual.

42. Como puede verse en el cuadro que antecede, durante el período 1941-50 la producción permaneció bastante estable, pero tuvo bruscos aumentos durante el quinquenio siguiente y de nuevo durante el período 1957-60, siendo acompañado cada aumento por una marcada alza de los precios oficiales (lo cual, no obstante, no pasaba a beneficiar al agricultor, puesto que se le descontaba para el pago de mayores impuestos). También es digno de mención que la zona cultivada aumentó sólo ligeramente, a la vez que disminuyó el número de agricultores.

43. Entre 1953 y 1962 el algodón en rama representó entre el 20% y el 33% del valor de las exportaciones visibles de Mozambique. Sin embargo, a partir de 1960 su importancia relativa disminuyó rápidamente a alrededor del 18% en 1963 y 1964, lo que se debe en parte a una declinación de la producción y de los precios, pero principalmente, al rápido aumento de las exportaciones de otros productos, en particular las de anacardo. Alrededor del 89% del algodón en rama producido en Mozambique se exporta a Portugal, y aproximadamente el 5% se consume en la fabricación local de productos textiles.

CUADRO 4

MOZAMBIQUE: PRODUCCIÓN, CONSUMO LOCAL Y EXPORTACIONES DE ALGODÓN EN RAMA

Año	Producción (millares de toneladas)	Consumo local (millares de toneladas)	Exportaciones			Porcentajes de las exportaciones totales
			A Portugal (millares de toneladas)	Total		
				(Millones de toneladas)	(Millones de escudos)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1955	32,4	0,8	31,0	32,7	430,9	28,0
1956	21,6	1,0	21,2	22,7	308,8	20,1
1957	34,9	0,9	30,0	31,6	477,1	25,1
1958	31,8	1,8	34,8	36,0	549,1	27,5
1959	38,7	1,8	32,8	35,0	540,6	28,5
1960	47,8	1,9	39,2	44,4	681,5	32,5
1961	37,1	2,1	38,9	42,6	696,0	27,1
1962	41,4	1,9	34,7	36,3	612,9	23,2
1963	31,6	33,0	527,8	18,0
1964	33,4	33,6	568,2	18,5

Fuentes: Columnas (1) y (2): Mozambique, *Estatística Industrial*, 1955-1962. Columnas (3) a (6): Mozambique, *Comércio Externo*, 1955-1962 y *Economía de Moçambique*, octubre de 1965.

Las exportaciones a otros países son insignificantes; en 1960 el principal comprador extranjero fue el Japón, que recibió sólo el 4% de las exportaciones. En el siguiente cuadro 4 pueden verse las cifras correspondientes a la producción y exportación de algodón en rama.

44. Cabe señalar que la mayor parte de la producción de algodón en rama de Mozambique sigue exportándose a Portugal con arreglo al sistema de cuotas obligatorias para las cuales

se fijan oficialmente precios C.I.F. Lisboa, pese a que el decreto de 1963 dispuso que este sistema debía quedar eliminado dentro de un plazo máximo de cinco años. Como ya se ha indicado en el estudio previo, hasta cerca de 1956 estos precios fueron considerablemente inferiores a las cotizaciones internacionales del algodón de calidades comparables. Según una fuente de información*, si el algodón exportado a Portugal desde Mozam-

* Bravo, *op. cit.*

bique de las cosechas de los años 1947 a 1955 se hubiese vendido libremente en el mercado mundial, habría producido aproximadamente 6.900 millones de escudos, o sea el 60% más que los 4.100 millones de escudos pagados por Portugal.

45. La misma política se refleja en la legislación sobre los productos textiles de algodón que, no obstante, fue revocada en junio de 1965. Con arreglo a la legislación vigente hasta dicha fecha, la producción local de textiles era restringida por una cuota máxima de oferta y por el requisito de que el algodón en rama fuese vendido a fabricantes locales a los precios prevalecientes en Portugal. Como puede verse en el cuadro 5,

las importaciones de textiles de algodón — principalmente de Portugal — representan el 7,4% del valor total de las importaciones visibles. Una fuente de información de Mozambique⁴, ha calculado que si estas importaciones hubiesen sido reemplazadas por producción local, en 1964 se habría producido una reducción del déficit comercial y un aumento correspondiente del producto interno de aproximadamente 251 millones de escudos; o sea, 1.361 millones de escudos de 1958 a 1964 inclusive.

⁴ *Economia de Moçambique*, Lourenço Marques, octubre de 1965.

CUADRO 5

MOZAMBIQUE — PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIÓN DE TEXTILES DE ALGODÓN

Año	Producción total		Importaciones ^a		
	(Millares de toneladas)	(Millones de escudos)	Total		Procedentes de Portugal (millones de escudos)
	(1)	(2)	(Millares de toneladas)	(Millones de escudos)	(5)
1955	1,1	37,3	5,7	362,3	294,9
1956	1,5	47,9	5,1	339,8	271,6
1957	1,3	41,8	5,0	335,9	263,6
1958	1,4	59,9	5,0	324,2	248,0
1959	3,1	70,7	5,3	330,5	241,5
1960	3,6	70,4	5,5	361,0	267,1
1961	4,1	109,3	3,4	210,4	161,8
1962	3,7	131,8
1963	3,2	147,6
1964	3,9	131,9	5,3	360,7	...

Fuentes: Columnas (1) y (2): Mozambique, *Estatística Industrial, 1955-1962* y, por lo que respecta a 1963 y 1964, *Boletim Mensal*, diciembre 1964. Columnas (3) a (5): Portugal, *Anuário Estatístico do Ultramar, 1955-1963*.

^a Incluso hilos y telas de algodón.

B. Azúcar

Generalidades

46. El cultivo y elaboración de la caña de azúcar constituye una de las mayores actividades agroindustriales de Mozambique. A pesar de ser uno de los cultivos más antiguos del territorio, su explotación comercial no empezó sino a fines del siglo XIX, cuando se establecieron las primeras grandes empresas azucareras en virtud de subconcesiones otorgadas por las compañías "Moçambique" y "Zambésia". Con un mercado local limitado, el azúcar se ha producido principalmente para satisfacer las necesidades de la metrópoli portuguesa y ha sido objeto de medidas oficiales de regulación y protección desde 1901.

47. Aproximadamente el 65% del azúcar producido en Mozambique corresponde a la cuota de Portugal, alrededor del 5,5% va a otros territorios portugueses y aproximadamente un 29,6% se consume localmente. Se ha exportado muy poco a otros países. Mozambique proporcionó alrededor del 75% de todas las importaciones de azúcar de Portugal hasta 1963, en su mayor parte en forma de azúcar crudo, y su producción constituye aproximadamente dos tercios de todo el azúcar producida en los territorios portugueses. Sin embargo, en 1964 Portugal importó 34% de sus necesidades de azúcar de países extranjeros.

48. La producción ha aumentado rápidamente en los últimos años, particularmente de 1955 a 1960, cuando la producción media fue un 66% mayor que la del lustro anterior y el doble del promedio de antes de la guerra. Hasta 1961, año en que fue superado por primera vez por el rápido aumento de las exportaciones de anacardo, el azúcar era el segundo cultivo de exportación de Mozambique, con un valor aproximadamente igual

a la mitad del valor de la exportación del algodón. En el último decenio ha representado entre el 8% y el 16,8% del valor total de las exportaciones del Territorio.

49. En 1963-1964, Mozambique produjo 181.775 toneladas de azúcar. Esta cifra representó alrededor del 0,6% de la producción mundial y algo más del 6% de todo el azúcar producido en África. Los actuales programas de desarrollo, que se reseñan en las secciones siguientes, se traducirán sin embargo en un gran aumento de la producción del Territorio en los próximos años.

50. El azúcar se cultiva exclusivamente en la parte sur de Mozambique, en valles fluviales cuyos suelos aluviales y clima húmedo pueden, según se informa, dar altos rendimientos. La caña cultivada es en su mayor parte una variedad híbrida que en 1960-1961 dio un rendimiento medio de 6,1 toneladas de azúcar por hectárea. Es un cultivo de gran densidad de capital, principalmente de regadío y que se realiza actualmente en fincas de propiedad de las centrales, aunque parece haber una tendencia reciente hacia un sistema de colonos independientes. Hasta 1961 toda la producción estaba en manos de tres compañías antiguas con propiedades en los valles de los ríos Zambeze, Incomati y Buzi. La superficie cultivada total en ese momento era de 38.578 hectáreas. Desde entonces, sin embargo, se han establecido tres nuevas compañías, con planes que, si se realizan plenamente, aumentarán la superficie cultivada en 121.000 hectáreas (véanse los párrs. 83 a 91 *infra*).

Organización de la producción

51. Actualmente la producción de azúcar está en manos de tres compañías: la Sena Sugar Estates Ltd., que produce azú-

car en dos ingenios situados en Luabo y Marromeu, en el delta del río Zambeze; la Companhia do Buzi, S.A.R.L., que trabaja en Vila Guilherme en el valle del Buzi, al sur de Beira; y la Sociedade Agrícola do Incomati, con plantaciones en Xinavane, en el valle del Incomati, al norte de Lourenço Marques. Además, tres nuevas compañías se han establecido recientemente, pero todavía no han iniciado la producción. Estas compañías se describen por separado más abajo.

52. Las compañías Sena y Buzi tienen su origen en las subconcesiones otorgadas por las compañías concesionarias "Mozambique" y "Zambésia" a fines del siglo XIX. La compañía Incomati se formó en 1914. La compañía Sena es con mucho la mayor productora de azúcar de las tres, pues su producción representa alrededor del 62% de la producción total del Territorio, en tanto que las compañías Incomati y Buzi producen respectivamente alrededor del 19% y el 13%.

53. La elaboración de la caña de azúcar se efectúa en centrales poseídas por las compañías y situadas cerca de las plantaciones. La elaboración se limita a producir azúcar blanco para el consumo local y azúcar crudo (*ramas amarelas*) para la exportación, debido a que las normas de importación de Portugal establecen que por lo menos dos tercios de las cuotas suministradas por los Territorios de Ultramar revistan esta forma. Se hace poco uso de los subproductos del azúcar debido al alto costo del transporte. En 1961 se produjeron alrededor de 28.000 toneladas de melaza destinadas principalmente a las fábricas de levadura del Territorio, y la compañía Incomati produjo 2 millones de litros de alcohol.

54. La superficie de plantaciones azucareras era de 38.577 hectáreas en 1960-1961, de las cuales aproximadamente 26.500 hectáreas se cosecharon durante el año. Esto representa un aumento de casi 50% sobre el período 1950-1951. Durante el mismo decenio, la producción de azúcar casi se duplicó, elevándose de 89.000 toneladas a 165.000 toneladas, diferencia que se debe principalmente a mayores rendimientos por hectárea, que aumentaron de un promedio de 4,9 toneladas de azúcar por hectárea, a 6,2 toneladas en 1960-1961. Con la introducción de sistemas mejorados de irrigación, se espera aumentar los actuales rendimientos, que son inferiores, por ejemplo, al de Indonesia (8,5 toneladas/hectárea).

55. En 1962, las inversiones industriales de las tres compañías mencionadas ascendían a más de 1.000 millones de escudos, de cuya cifra 800 millones representaban plantas y equipo y 133 millones viviendas para el personal. El capital social de las compañías sumaba 488 millones de escudos.

a) Sena Sugar Estates, Ltd.

56. La Sena Sugar Estates, Ltd., compañía en su mayor parte de propiedad inglesa, es la empresa agrícola más capitalizada de Mozambique. Su capital en acciones emitido al 31 de diciembre de 1964 era de £3.521.250 (alrededor de 300 millones de escudos), de los cuales £3.071.250 consistían en acciones ordinarias, un 90% de las cuales se poseían en el Reino Unido. Su activo total ascendía a £5.227.205.

57. La compañía, en su forma presente, data de 1920 y es el resultado de una fusión de empresas, la más importante de las cuales era la Sena Sugar Factory, fundada a principios de siglo. Tiene su domicilio social en Londres y el consejo de administración, exclusivamente británico, está presidido por el Teniente Coronel J. D. Hormung, pariente del fundador original. La compañía tiene una filial, de exclusiva propiedad suya, la

Sociedade Industrial do Ultramar, S. A. R. L., que explota la mayor refinería de azúcar de Portugal, en la que se elaboran todas las importaciones portuguesas de la compañía matriz, junto con el azúcar de otros productores.

58. Los bienes de la compañía en Mozambique incluyen 72.200 hectáreas de tierras en plena propiedad, una cuarta parte de las cuales se emplean para el cultivo de azúcar. El azúcar se cultiva en dos plantaciones: una en Luabo, en la ribera norte del río Zambeze, en el distrito de Zambézia, y la otra en Marromeu, en la ribera sur del río, en el distrito de Manica e Sofala. En 1958-1959, había 10.865 y 9.762 hectáreas cultivadas en las dos fincas respectivamente. Una tercera finca, en Mopeia, antes destinada al cultivo del azúcar, fue convertida en concesión algodонера en 1936.

59. Como las otras empresas azucareras, la compañía elabora su propia caña y es propietaria de dos de las cuatro centrales que hay en Mozambique. Esos ingenios están situados cerca de las plantaciones de Marromeu y Chinde (Luabo). En 1963 se informaba que las centrales tenían una capacidad diaria de elaboración de caña de 3.200 y 2.900 toneladas respectivamente, lo que representaba el 57,5% de la capacidad total de elaboración del Territorio. Durante los últimos diez años, la producción de azúcar ha fluctuado entre 91.000 toneladas y 126.000 toneladas: el año 1962 fue el de producción máxima con 126.486 toneladas de azúcar. En 1964, la producción total fue de 96.794 toneladas, de las cuales alrededor de 56.000 fueron producidas en Marromeu y aproximadamente 40.000 en Luabo. En enero de 1965, la compañía anunció la iniciación de un gran programa de desarrollo, sobre el que se dan detalles más adelante (véanse los párrs. 83 a 91 *infra*).

60. Entre las instalaciones que posee la Sena Sugar Estates, Ltd., figuran 350 kilómetros de ferrocarril de vía estrecha entre las plantaciones y las centrales y un ramal de 88 kilómetros que une Marromeu al Ferrocarril Trans-Zambézia en Caia. Además, la compañía posee una pequeña flota fluvial con la que transporta el azúcar al puerto de Chinde, donde aquella tiene sus propias instalaciones de carga.

61. Aparte de sus actividades de producción de azúcar, la Sena tuvo hasta 1962 una concesión algodонера centrada en su finca de Mopeia, donde explota una planta de elaboración de algodón. También posee una pequeña plantación de copra cerca de Chinde, donde unas 100.000 palmeras rinden alrededor de 600 toneladas de copra al año, concesiones forestales y una explotación ganadera cerca de Luabo. Las actividades industriales y comerciales de la compañía incluyen la fabricación de cemento, la elaboración de madera para la exportación y la explotación de una agencia naviera.

62. En 1952-1953, último año sobre el que se poseen datos al respecto, la compañía empleaba a 21.000 africanos y 397 europeos. Según sus propias estimaciones, la contribución total de la compañía a la economía de Mozambique en forma de salarios, impuestos y gastos locales durante el período 1932-1952 ascendió a casi 661 millones de escudos. En 1952, la compañía gastó 20,4 millones de escudos en salarios africanos, más 18 millones de escudos en la alimentación de trabajadores africanos y 2,7 millones de escudos en servicios médicos.

63. Los ingresos de las diversas empresas controladas por la Sena no pueden deducirse por separado de sus estados de cuentas anuales. Las utilidades, las sumas reservadas al pago de impuestos y los dividendos distribuidos anualmente durante un período de cuatro años son los siguientes:

	1960	1961	1962	1963
	£	£	£	£
Utilidades netas antes del pago de impuestos (inclusive SIDUL)	654.169	244.466	637.117	540.429
Reservas para el pago de impuestos	278.295	159.986	288.716	264.271
Utilidades líquidas	361.402	84.474	348.401	276.658
Dividendos	199.632	122.850	122.850	122.850

b) *Sociedade Agrícola do Incomati, S.A.R.L.*

64. La compañía se constituyó en 1914 con el nombre de Incomati Sugar Estates. Originalmente de propiedad británica, cambió de nombre poco después de 1950 cuando al parecer pasó totalmente a manos portuguesas. La compañía tiene su domicilio social y una central azucarera en Xinavane, cerca de Lourenço Marques. En 1964 su capital social ascendía a 100 millones, de escudos y las acciones liberadas representaban 90 millones. Esta compañía es el segundo productor de azúcar de Mozambique. En 1960-1961 tenía 8.821 hectáreas de plantación azucarera de la que obtenía casi 38.000 toneladas de azúcar. Su producción en 1962 fue de 30.400 toneladas de azúcar (15.800 toneladas de azúcar blanco y 14.600 toneladas de azúcar crudo) y 8.200 toneladas de melaza.

65. La única actividad conocida de la compañía, aparte de la producción de azúcar, es la cría de ganado vacuno, en una finca cerca de Xinavane.

c) *Companhia do Buzi, S.A.R.L.*

66. Constituida en 1898 para explotar una subconcesión otorgada por la Companhia de Moçambique, la compañía tiene su domicilio social en el Territorio y en 1964 su capital social era de 110 millones de escudos. Es una compañía con múltiples actividades económicas y se ha dicho que es "la más importante y completa de todas las organizaciones agrícolas e industriales de nacionalidad portuguesa en Mozambique". La concesión original de tierras, que expiró en 1942 cuando la Companhia de Moçambique dejó de existir, abarcaba 312.500 hectá-

* Mozambique, *Documentário Trimestral*, No. 32, diciembre de 1942.

reas. No se conoce la extensión de las tierras que posee en la actualidad, pero probablemente excede de 150.000 hectáreas.

67. Dedicada principalmente a la producción de azúcar, la compañía es la más pequeña de las tres grandes empresas productoras de azúcar de Mozambique. En 1960-1961 tenía 7.982 hectáreas de plantación azucarera de las que obtenía 33.200 toneladas de azúcar (inclusive 19.000 toneladas de azúcar blanco), 10.900 toneladas de melaza y 2 millones de litros de alcohol. La compañía inició la producción de azúcar en gran escala en 1920, cuando compró los Illovo Sugar Estates, antes de propiedad británica. Su destilería de alcohol se instaló en 1934.

68. La compañía Buzi fue la primera compañía de Mozambique que introdujo el cultivo de la caña de azúcar por colonos independientes. En 1955 cedió parte de sus tierras a diez colonos que se obligaron a entregar su cosecha de azúcar a la compañía a cambio del pago de un porcentaje fijo del precio de fábrica. En 1964 estos agricultores suministraban alrededor de la mitad de la cosecha de caña de azúcar de la compañía, que ascendía a 209.000 toneladas. En 1965 se informó que la compañía planeaba instalar veinte colonos más.

69. Además del azúcar, la Companhia do Buzi tenía anteriormente una concesión algodonera, que abandonó en 1962, y actividades en la esfera de la silvicultura, la ganadería, la fabricación de baldosas y la explotación de fábricas de harina, principalmente harina de maíz para los propios empleados africanos de la compañía.

70. En 1964 se informó que la central azucarera de la compañía situada en Nova Lusitânia, estaba siendo objeto de reformas por un contratista británico a un costo de £300.000 (24 millones de escudos).

CUADRO 6

COMPAÑÍAS AZUCARERAS DE MOZAMBIQUE: SUPERFICIE CULTIVADA, CAPACIDAD DE LAS CENTRALES AZUCARERAS Y PRODUCCIÓN, 1960-1961

			Situación	Capital social (millones de escudos ^a)	Superficie (hectáreas)	Producción de caña		Capacidad de las centrales azucareras ^b (toneladas por día)	Producción de azúcar		
						Millares de toneladas	Toneladas por hectárea		Millares de toneladas	Rendimiento ^c	
Sena Sugar Estates, Ltd.			Marromeu (Manica e Sofala) .	288 ^d	11.286	472	53,8	3.200	46,4	10,2	
			Luabo (Zambézia)		10.460	453	59,7	2.900	47,8	9,5	
Sociedade Agrícola do Incomati			Xinavane (Lorenzo Márquez)	100	8.821	316	37,5	2.400	37,7	8,5	
Companhia do Buzi			Vila Guilherme (Manica e Sofala) .	110	7.982	287	43,2	2.100	33,2	8,6	
				<u>498</u>	<u>28.549</u>	<u>1.528</u>		<u>10.600</u>	<u>165,1</u>		

^a Capital social de la compañía y no sólo de las centrales y plantaciones de azúcar.

^b Todas las centrales producen azúcar blanco para el consumo y azúcar crudo para la exportación.

^c Número de toneladas de caña para producir una tonelada de azúcar.

^d Capital nominal.

Reglamentación y controles oficiales

a) *Reseña histórica*

71. El azúcar se produce en los Territorios de Ultramar principalmente con el fin de satisfacer las necesidades de Portugal y ahorrar así divisas. Por ello, desde 1870, y más particularmente desde 1901, el azúcar de los Territorios de Ultramar ha sido admitido al mercado portugués con aranceles fuertemente proteccionistas y garantías cuantitativas. En 1930, al

producirse la baja de los precios mundiales, se ordenó (decreto 18.021, marzo de 1930) que todas las importaciones de azúcar de Portugal se reservasen para los Territorios de Ultramar, en la medida en que éstos pudieran satisfacerlas, y se creó un *grémio* de productores de azúcar de ultramar para determinar las necesidades anuales de Portugal y distribuir las entre sus miembros. No se preveía ninguna sanción por falta de cumplimiento en la entrega de las cuotas establecidas, las que, junto con los precios estabilizados, tenían por objeto principal ofrecer

a los productores suficiente seguridad para ampliar su producción. Como consecuencia de esta protección, los Territorios de Ultramar pudieron proveer casi todas las importaciones azucareras de Portugal desde 1930 a 1945.

72. Sin embargo, después de la segunda guerra mundial el consumo de azúcar de Portugal aumentó marcadamente y como ello no fue acompañado de un aumento equivalente de la producción de los Territorios de Ultramar, Portugal se vio nuevamente obligado a importar azúcar de otras fuentes, esta vez a precios muy superiores a los pagados a los productores de los Territorios de Ultramar. Para remediar esta situación, Portugal estableció en 1949 (Decreto 37.456, 24 de junio de 1949) precios fijos para el azúcar de ultramar e introdujo sanciones para los productores que no satisficieran las cuotas establecidas. Esta política informó también el decreto 38.701 (28 de marzo de 1952), que sigue en vigor hasta 1967 y constituye la base legislativa del régimen actual que más adelante se reseña. En 1965 se creó una comisión para estudiar y formular propuestas con respecto al nuevo régimen que ha de entrar en vigor el 1° de mayo de 1967.

b) Situación actual

73. Según el decreto 38.701, se garantiza por separado a Mozambique y a Angola hasta 1967 el derecho de proveer el 50%

del azúcar consumido en Portugal. La cantidad exacta que ha de importarse de cada Territorio, que puede ser mayor o menor que la mitad del total, se determina de antemano para cada zafra. Estas asignaciones y también cualquier revisión de los precios fijados, C.I.F. en Lisboa, son acordadas por el Gobierno portugués con el asesoramiento del *grémio* de productores de azúcar de ultramar, teniendo en cuenta la producción prevista, las necesidades del consumo local y los requerimientos de otros Territorios de Ultramar. Una vez determinadas estas cantidades globales, el *grémio* señala una cuota a cada una de sus compañías afiliadas a base de las cantidades suministradas por éstas durante los dos años anteriores. Las compañías pueden exportar a Portugal por encima de sus cuotas, pero quedan sujetas a sanciones si no pueden cumplirlas por haber vendido azúcar en el mercado mundial; no hay sanción cuando la falta de cumplimiento de la cuota se debe a circunstancias imprevisibles. Una vez cumplidas las cuotas, los productores pueden exportar libremente cualquier excedente a otros países.

74. Mozambique suministra de hecho alrededor del 75% de las importaciones de azúcar de Portugal. Durante el último decenio (1954-1955 a 1964-1965) su asignación global ha pasado de menos de 58.000 toneladas a casi 132.000. El siguiente cuadro muestra la distribución de las cuotas por compañías en ocho zafras:

CUADRO 7
MOZAMBIQUE: CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR A PORTUGAL, POR COMPAÑÍAS
(Miles de toneladas)

	<i>Cuota total del Territorio</i>	<i>Sena</i>	<i>Incomati</i>	<i>Buzi</i>	<i>Exportaciones reales a Portugal</i>
1954-1955	57.880	41.880	8.000	8.000	46.529
1955-1956	82.850	53.650	15.800	13.400	82.707
1956-1957	82.900	53.877	14.002	15.021	84.950
1957-1958	93.030	62.804	15.626	14.600	93.028
1958-1959	100.621	65.369	18.066	17.186	100.221
1959-1960	106.588	70.253	19.281	17.054	106.518
1960-1961	105.784	64.500	22.941	18.343	105.710
1961-1962	101.976	57.000	23.961	21.015	98.594

No se dispone de información sobre las dos zafras siguientes, pero en 1964-1965 la cuota global de Mozambique era 131.547 toneladas, distribuidas entre las tres compañías como sigue: Sena Sugar Estates, Ltd., 82.861 toneladas; Sociedade Agrícola de Incomati, 24.914 toneladas; Companhia do Buzi, 23.773 toneladas.

75. Los productores de los Territorios de Ultramar pueden entregar hasta un tercio de sus cuotas en forma de azúcar blanco, y el resto en azúcar crudo (ramas amarelas) para ser refinado en Portugal. En realidad, los productores no han aprovechado plenamente esta concesión y normalmente suministran cuatro quintos de su cuota en la forma de azúcar crudo.

76. Los precios de importación C.I.F. Lisboa son fijados por el Gobierno portugués según el decreto 38.701, que prevé la revisión de los precios si el *grémio* puede demostrar que los costos de producción, transporte, etc., han aumentado. En 1952 estos precios se fijaron en 2,85 escudos por kilogramo de azúcar crudo y 3,75 escudos por kilogramo de azúcar blanco refinado. Estos precios permanecieron en vigor hasta 1964 cuando (por decreto 45.691, de 29 de abril de 1964) esos precios fueron elevados a 3,35 escudos y 4,40 escudos respectivamente.

77. El azúcar de los Territorios de Ultramar está sujeto a un impuesto de importación en Portugal de 1,16 escudos por kilo para el azúcar crudo y 1,45 escudos por kilo para el azúcar blanco refinado (decreto 45.555, 8 de febrero de 1964). Además, se cobra un "impuesto de salvación nacional" de 0,04 escudos por kilo. Este impuesto se introdujo en 1928 durante la depre-

sión económica mundial (decreto 15.814) y era esencialmente un impuesto de lujo para aumentar los ingresos del erario. Su persistencia hasta la fecha es motivo de queja entre los productores de azúcar.

Producción, exportaciones y consumo local

78. La reglamentación y protección por Portugal de la industria azucarera de los Territorios de Ultramar indudablemente ha beneficiado a los productores, en especial durante el largo período de depresión que se prolongó desde 1929 hasta el estallido de la segunda guerra mundial. Por otra parte, algunos industriales sostienen que el hecho de que el desarrollo de la industria estuviera orientado hacia la demanda portuguesa tendió a inhibir la expansión después de la guerra, cuando los precios mundiales eran superiores a los pagados por Portugal.

79. En realidad, la producción de azúcar de Mozambique ha correspondido aproximadamente a la expansión del mercado portugués. Entre 1935 y 1939, la producción anual media ascendió a 74.000 toneladas y luego subió lentamente a 76.000 toneladas en 1945-1946 y 89.000 toneladas en 1950-1951. Durante los cinco años siguientes permaneció bastante estática debido a que, a pesar del fuerte aumento del consumo portugués, la capacidad de producción había quedado agotada antes de la guerra y durante ésta y era incapaz de satisfacer la demanda. Sin embargo, en 1955-1956 la industria había sido reequipada y en los ocho años siguientes la producción se duplicó con creces como puede verse en el cuadro siguiente:

CUADRO 8

MOZAMBIQUE: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR
(Millares de toneladas)

Zafra	Producción de azúcar ^a			Melaza
	Total	Crudo	Blanco	
1955/1956	124,1	66,0	58,1	26,8
1956/1957	139,4	79,7	59,8	28,0
1957/1958	164,0	89,2	74,8	31,8
1958/1959	153,2	84,8	68,5	30,4
1959/1960	165,7	82,2	82,8	33,3
1960/1961	165,0	78,2	87,0	33,0
1961/1962	165,1	78,2	87,0	33,0
1962/1963	186,3	103,3	82,9	19,8
1963/1964	181,8

Fuentes: Columna 1 — Decreto Ley 45.691, 28 de abril de 1964. Columnas 2, 3 y 4 — Mozambique, *Estatística Industrial*, 1956-1963.

^a Por haberse usado diferentes fuentes, hay discrepancias entre los totales de las columnas 2 y 3 y las cifras de la columna 1.

80. Aunque el consumo de azúcar per cápita en Mozambique es todavía bajo (7,9 kilos en 1961) en comparación con el de otros muchos países, la cantidad de azúcar consumida en el Territorio ha aumentado a un ritmo más rápido que la producción y las exportaciones durante los últimos 30 años. En 1934-1938, el promedio anual del consumo local era 5.400 toneladas. Esta cifra aumentó a 27.677 toneladas en el período 1951-1955 y 40.318 toneladas en el período 1956-1960. En 1961 la cantidad de azúcar retenida para el mercado local fue de 50.801 toneladas, es decir el 30,8% de la producción total.

81. Entre 1946 y 1955, el azúcar representó por término medio algo menos del 12% del valor de las exportaciones internas totales de Mozambique. En 1957 llegó a un punto máximo del 16,8%, para luego declinar en importancia relativa, a pesar de un aumento continuo de las exportaciones, a sólo 7,1% en 1962. Este descenso relativo es atribuible, por supuesto, al aumento más rápido del valor de exportación de otros productos. En 1964, el azúcar ocupaba el cuarto lugar entre las exportaciones agrícolas, después del anacardo, el algodón en rama y el sisal.

Como puede verse en la sección siguiente, esta importancia relativa probablemente cambiará cuando comiencen a dar frutos los actuales proyectos de desarrollo.

82. Hasta ahora, alrededor del 86% de las exportaciones de azúcar de Mozambique han ido a Portugal; el resto se ha exportado a la India (entre el 3% y el 8%), a la desaparecida Federación de Rhodesia y Nyasalandia (aproximadamente el 9,5%) y pequeñas cantidades a otros territorios, inclusive Timor y, a veces, Macao. Desde 1958, principalmente debido al aumento del consumo de Mozambique, se han interrumpido las exportaciones de azúcar a territorios no portugueses de Africa, salvo pequeñas cantidades de melaza (8.000 toneladas en 1962). En virtud del Convenio Internacional del Azúcar, Portugal tiene asignado un tonelaje básico anual de exportación de 20.000 toneladas que puede ser usado por cualquier productor de azúcar del ámbito portugués. Hasta 1962, Mozambique no ha tenido ningún excedente para tal exportación. En el cuadro siguiente pueden verse las cantidades dedicadas al consumo local y a la exportación desde 1955.

CUADRO 9

MOZAMBIQUE — AZÚCAR: CONSUMO LOCAL, EXPORTACIONES Y PRINCIPALES DESTINOS, 1955-1964

Año	Consumo local Millones de toneladas (1)	Exportaciones ^a			Principales destinos ^a			
		Millares de toneladas (2)	Millones de escudos (3)	Porcentaje del valor total de las exportaciones (4)	Portugal		Goa y Rhodesia y Nyasalandia	
					Toneladas (5)	Porcentaje (6)	Porcentaje (7)	Porcentaje (8)
1955	30,0	85,8	213,6	13,98	76.254	88,87	1,45	9,52
1956	35,0	98,2	248,5	16,40	84.704	86,26	3,69	9,75
1957	35,0	122,3	316,0	16,88	100.138	81,88	7,57	9,45
1958	35,0	132,4	337,2	16,62	108.338	81,83	6,66	11,31
1959	44,0	114,1	289,6	15,21	105.048	92,07	7,76	—
1960	45,0	111,3	278,2	13,25	103.862	93,32	6,53	—
1961	50,0	113,8	324,9	12,75	105.219	92,46	7,21	—
1962	55,0	129,9	345,1	13,19	128.690	99,07	—	—
1963	60,0	...	327,5 ^b	11,3 ^b
1964	66,0	...	245,7 ^b	8,1 ^b

Fuentes: Excepto los datos de la columna (1), todos están tomados de: Mozambique, *Comércio Externo*. La columna (1): Portugal: Decreto-Ley No. 45.691 de 28 de abril de 1964.

^a Estas cifras no incluyen la melaza.

^b Datos tomados de *Marchés tropicaux*, 1° de enero de 1966.

Acontecimientos recientes

83. Según la información disponible, durante los cinco últimos años ha habido una considerable expansión de la industria azucarera, la que empieza a considerarse como uno de los grandes recursos económicos del Territorio y como un medio eficaz de colonizar las zonas hasta ahora deshabitadas del país. Aparte de los programas de desarrollo de las compañías existentes (véase más adelante), se han constituido o están organizándose tres nuevas compañías.

84. La primera de éstas es la Açucareira de Moçambique, S.A.R.L., que se formó en 1964 y recibió una concesión provisional de 15.000 hectáreas en el río Púnguè, aproximadamente a 35 kilómetros de Beira, así como una autorización para construir una central con una capacidad anual de 30.000 toneladas de azúcar. La compañía tenía un capital social inicial de 8,5 millones de escudos, que se elevó a 100 millones de escudos en marzo de 1966 cuando completó su estructura financiera. Según informaciones recibidas a mediados de 1965, la compañía estaba esforzándose por obtener hasta el 70% de su capital por suscripción local en Mozambique, ofreciendo sus acciones a precios accesibles a los pequeños inversores. El resto de su capital en acciones sería puesto a disposición de los intereses financieros extranjeros que proporcionarían apoyo técnico. La firma francesa Compagnie pour l'étude et le développement des échanges commerciaux (COMPADEC) había expresado interés en 1965, según se informa, por suscribir un número minoritario de acciones.

85. La compañía planea distribuir toda su concesión de tierras entre 150 colonos, dando preferencia a residentes de Mozambique que ya poseen experiencia en el cultivo del azúcar y a ex soldados jóvenes portugueses. Cada familia recibirá tierra suficiente para producir 3.000 toneladas de caña de azúcar por año; los gastos de preparación de las tierras, instalación, edificios y equipo serán financiados por la compañía y reembolsados por el colono con el producto de sus cosechas. Una vez completados esos reembolsos los colonos adquirirán la plena propiedad de las fincas. El plan prevé la formación de una cooperativa agrícola. A principios de 1965 se estimó que la inversión total de la compañía ascendería a 570 millones de escudos, de los cuales 365 millones se dedicarían a equipo industrial y 206 millones a la producción de caña de azúcar.

86. La segunda compañía es la Marracuene Agrícola Açucareira, S.A.R.L. (Maragra), que fue constituida en 1963 por la Marracuene Agrícola e Comercial, Lda. con ayuda de un préstamo de 220 millones de escudos del Banco de Fomento Nacional y de la Industrial Development Corporation of South Africa^b. La nueva compañía es de propiedad exclusivamente portuguesa y tiene un capital social de 130 millones de escudos. Se reservaron acciones por valor de 30 millones de escudos para ser suscriptas en el Territorio. La compañía estimó que la inversión total ascendería a 430 millones de escudos.

87. La compañía recibió una concesión de tierras de 6.000 hectáreas en Manhica en el Valle del Incomati. Parte de la finca (2.800 hectáreas) será administrada directamente por la compañía y el resto (3.200 hectáreas) será explotado por colonos que contarán con la ayuda de la compañía y le venderán su cosecha de caña a cambio de un porcentaje (55%) del precio de fábrica. La Junta de Colonización Provincial está encargada de bonificar las tierras y de seleccionar e instalar a los colonos, elegidos de entre personas ya residentes en Mozambique. Los colonos serán agrupados en poblados y contarán con escuelas, un hospital y servicios de recreo. Durante la primera fase del desarrollo, se radicarán en la zona 100 familias europeas y 3.200 trabajadores africanos.

88. La compañía ha sido autorizada para construir una central azucarera que, cuando llegue a su máxima expansión, tendrá una capacidad de 60.000 toneladas de azúcar. Además, ha sido autorizada para establecer una refinería de azúcar capaz de refinar plenamente hasta el 60% del azúcar producido, un ter-

cio del cual se exportará a Portugal, destinándose el resto al consumo local.

89. La tercera nueva empresa, potencialmente la mayor productora de azúcar en todos los territorios bajo la administración portuguesa, está siendo organizada por la Portuguese Development Corporation, filial de la Anglo-American Corporation of South Africa. En 1964, la compañía recibió del Gobierno de Portugal una concesión de tierras de 100.000 hectáreas situadas en la parte sur del Valle del Zambeze, dentro de un triángulo limitado por Quelimane, Chinde y Vila Fontes. Según se informa, el capital de inversión es de origen sudafricano y australiano. La mitad de la concesión será explotada por la compañía misma, debiendo las restantes 50.000 hectáreas ser asignadas a 500 colonos, cada uno de los cuales recibirá 100 hectáreas. La tierra que se distribuirá a los colonos será preparada por la compañía, que también prestará asistencia técnica a los agricultores. El sistema de riego se está construyendo por un contrato con una empresa japonesa. Se espera que la producción de azúcar comience en 1966 ó 1967. La compañía ha anunciado que su objetivo último a largo plazo es una producción anual de un millón de toneladas de caña de azúcar.

90. Finalmente, en enero de 1965, la Sena Sugar Estates, Ltd. anunció la iniciación de un programa importante de bonificación de sus fincas actuales que entraña una inversión total de unos 360 millones de escudos. El proyecto incluye la construcción de un nuevo sistema de riego encaminado a aumentar el rendimiento de sacarina de las plantaciones existentes y una mejora correspondiente de la capacidad de los ingenios para elevar la producción total de azúcar de la compañía a aproximadamente 160.000 toneladas en 1969 y finalmente a más de 200.000 toneladas en 1970. De la inversión total estimada, 136 millones de escudos (£1,7 millones) se gastarán en la instalación de un sistema de riego por aspersión que se construirá en un período de tres años y abarcará aproximadamente 11.600 hectáreas de las plantaciones existentes. Los fondos para esta inversión de capital estaban reuniéndose principalmente en Londres y el contrato para la obra de riego fue adjudicado en enero de 1965 a una empresa británica, la Wright Rain, Ltd.

91. En 1960-1961 la superficie total dedicada al cultivo de la caña de azúcar en Mozambique era de 38.577 hectáreas, que producían 1,5 millones de toneladas de caña de azúcar. Es evidente, pues, que los acontecimientos recientes que acaban de reseñarse revolucionarán la producción de azúcar en el Territorio si todos los planes llegan a realizarse plenamente.

*C. Anacardo**Generalidades*

92. El anacardo, árbol indígena del Brasil, fue introducido en Africa y en el subcontinente indio en el siglo XVI. En Mozambique, donde las condiciones se prestan especialmente a su crecimiento, el anacardo se propagó ampliamente por reproducción espontánea y ha sido utilizado desde hace largo tiempo por la población indígena como alimento y para la fabricación de una bebida fermentada¹. La explotación comercial del anacardo no comenzó, sin embargo, sino hasta después de la primera guerra mundial cuando la India, que tenía un monopolio virtual en la elaboración y exportación de almendras de anacardo (marañón), comenzó a importar de Mozambique almendras en cáscara para su elaboración y reexportación.

93. Durante el decenio de 1920 y en los primeros años del decenio siguiente, las exportaciones a la India fueron de poca envergadura, oscilando entre 1.000 y 7.000 toneladas. En 1935, sin embargo, aumentaron señaladamente las compras hechas por la India en Mozambique y, con excepción del período correspondiente a la segunda guerra mundial, siguieron aumentando hasta 1958, año en que las exportaciones a ese país llegaron a un máximo de más de 97.000 toneladas, por un valor de

^b En 1966 recibió nuevos préstamos, por un total de 50 millones de escudos, del Banco Nacional Ultramarino y el Banco de Fomento Nacional.

¹ En 1909 se implantó un impuesto sobre los anacardos en el distrito de Manica e Sofala a fin de limitar su número y reducir así el consumo de la bebida alcohólica. En un escrito de 1893, Antonio Enes, que había sido gobernador de la zona, describía el anacardo como "árbol de vicio y ruina" y recomendaba su erradicación.

278 millones de escudos, con lo que el anacardo se colocó entre los cuatro principales productos de exportación de Mozambique.

94. El rápido aumento de las compras de almendras de anacardo de Mozambique por parte de la India, al propio tiempo que se triplicaban los precios entre 1945 y 1958, se debió a la apertura de un gran mercado mundial que la India no podía abastecer solamente con su producción. Incluso hoy en día, especialmente en los Estados Unidos de América, el mercado sigue expandiéndose y las exportaciones de Mozambique han aumentado, tanto en volumen como en valor unitario, con lo que los ingresos totales de las exportaciones de anacardo se han duplicado con creces entre 1962 y 1964.

95. En la actualidad Mozambique produce anualmente unas 150.000 toneladas de almendra de anacardo sin descascarar y sus exportaciones representan casi la mitad del total de las exportaciones mundiales de ese producto¹. En 1964, las exportaciones de anacardo de Mozambique ascendieron a casi 128.000 toneladas, por un valor de 608,4 millones de escudos y esas exportaciones, sumadas a las del extracto de cáscara de anacardo (11 millones de escudos), representaron el 20,4% del valor total de las exportaciones visibles del Territorio. En 1964, el valor de las exportaciones de anacardo superó por primera vez al de las del algodón, en casi 55 millones de escudos.

96. A pesar de los intensos esfuerzos realizados, especialmente desde 1959, para desarrollar la elaboración industrial del anacardo en Mozambique, en 1964 el 97% aproximadamente de las exportaciones consistían en anacardo en bruto que se enviaba a la India para su elaboración y reexportación. La razón de ello es que la industria india está muy bien organizada y en condiciones de efectuar el descascarillado a mano en gran escala a un costo muy inferior al de otras partes. En Mozambique, donde no se dispone con facilidad de grandes concentraciones de trabajadores y los costos de producción son mayores, se ha tratado de lograr un equipo mecánico adecuado, tanto para descascarar la almendra como para obtener subproductos. Se han ideado varias técnicas y se están equipando rápidamente las fábricas. Si bien estas últimas están todavía en parte en la etapa experimental, la cantidad de capital invertido hace pensar que se han resuelto finalmente los problemas técnicos. Si el consumo mundial sigue aumentando, el anacardo puede llegar a ser una importante fuente de riqueza y de divisas para Mozambique. Se calcula que, a los precios del mercado, el anacardo exportado en 1964 habría representado, si hubiera estado totalmente elaborado, más de 900 millones de escudos.

97. El árbol del anacardo crece espontáneamente en grandes zonas de Mozambique, en particular en los suelos francoarenosos de las regiones costeras, y la única región costera donde no se da es en el delta del río Zambeze, de suelos muy arcillosos. El anacardo prospera especialmente en los distritos de Mozambique y Cabo Delgado donde es común que los árboles tengan una altura de hasta 12 metros y una copa de más de 15 metros de ancho. En 1961, es decir el último año de que se dispone de información, el 60% aproximadamente de la producción provenía del distrito de Mozambique, y la zona de mayor producción era la de los alrededores de Nampula. En el distrito de Cabo Delgado, a pesar de su riqueza en árboles de anacardo, se produjo solamente un 20% aproximadamente del total debido principalmente a dificultades de transporte. Las regiones siguientes, por orden de importancia, eran los distritos de Inhambane y Gaza con el 18% de la producción total en 1961. El distrito de Manica e Sofala, si bien es adecuado para el cultivo del anacardo, produce muy poco en la actualidad, debido a las medidas que se adoptaron a comienzos de siglo para reducir el número de árboles y restringir así la fabricación de una bebida alcohólica (véase la llamada j).

98. El árbol de anacardo tarda en crecer de cinco a seis años antes de comenzar a producir plenamente y llega a su máxima productividad a los doce años aproximadamente. El árbol produce un fruto piriforme al que está adherida la almendra o marañón. El fruto, de sabor agrio y rico en vitamina C y

glucosa, se utiliza por lo general como alimento o para producir zumo o alcohol; en algunos países, en especial en el Brasil, se ha explotado en forma comercial. La semilla de la almendra, que es el producto principal, puede también utilizarse para la extracción de aceite. El extracto de la cáscara de anacardo tiene muchas aplicaciones en la industria como barniz o laca o en la fabricación de caucho sintético e insecticidas²; en algunos países se explotan comercialmente la madera del árbol y las resinas extraídas de la misma. En Mozambique, el único subproducto aprovechado hasta ahora en forma comercial es el extracto de la cáscara de anacardo.

Organización de la producción

99. La producción de anacardos se halla, en su mayoría, en manos de africanos: más del 87% de la producción total proviene de las ventas hechas por éstos. En su mayor parte procede de árboles que han crecido espontáneamente, pero, a medida que aumentan los precios, los africanos están cultivando cada vez más el anacardo en combinación con otras cosechas y se han hecho recientemente planes de colonización basados en tal cultivo en los distritos de Mozambique y Gaza (véase párr. 130 *infra*). Los africanos venden el producto a intermediarios, que lo exportan descascarado directamente a empresas de elaboración de la India con las que mantienen relaciones. Hasta 1964, cuando el Gobierno comenzó a fijar los precios mínimos que debían abonarse a los productores de las diversas zonas, los precios dependían únicamente de la oferta y de los precios de importación fijados en Bombay. Los intermediarios, que suelen ser los abastecedores de artículos de consumo a los comercios africanos, brindan créditos a éstos a cambio de entregas del producto. Según una fuente portuguesa³, los precios son generalmente elevados al comienzo de la estación de la cosecha y caen posteriormente a medida que aumenta la oferta. En 1961-1962, por ejemplo, en la zona de Antonio Enes, el precio inicial era de 2 escudos por kilogramo, bajaba seguidamente a 1,5 escudos, aumentaba luego por un breve período a 2,50 escudos al disminuir la oferta, y finalmente se reducía a 1 escudo por kilogramo. Los precios varían según la calidad y el tamaño de la almendra (la de mayor tamaño y valor proviene de las regiones septentrionales, en especial de la zona de Nampula), y según el costo de transporte⁴. Cabe señalar que el precio medio de exportación de la almendra sin descascarar fue de 3,6 escudos por kilogramo en 1960 y 3,7 escudos en 1961⁵. Desde que se han establecido las nuevas fábricas de elaboración en el Territorio, los africanos han podido vender parte de su producción directamente a las fábricas a precios fijados oficialmente.

100. El número de africanos dedicados en la actualidad al cultivo o a la recolección de almendras de marañón varía de un año a otro. En el censo agrícola de 1962, se calculó que en el distrito de Mozambique, al que corresponden casi las dos terceras partes de la producción africana, había unos 279.114 africanos dedicados a la recolección de almendras de unos 10.600.000 árboles. En el distrito de Cabo Delgado había 96.332 africanos dedicados a la recolección de más de 3 millones de árboles, y en el distrito de Nyassa, 4.535 africanos de unos 26.500 árboles. Si se toman como normales las cifras correspondientes a los dos primeros distritos puede verse que el número medio de árboles por productor es de 35, lo que, con un rendimiento calculado en 20 kilogramos por árbol, habría producido un ingreso medio de 700 a 1.400 escudos a los precios prevalecientes⁶.

101. El anacardo que se cultiva en predios de no africanos se vende a un precio aproximadamente igual o ligeramente

¹ En los Estados Unidos está clasificado como producto de importancia estratégica.

² J. do Amparo Baptista, *O cajueiro em Moçambique*, Lourenço Marques, 1959.

³ En 1963, el precio medio para el agricultor fue sólo 1,5 escudos por kilogramo. Desde entonces ha sido por término medio de 3 escudos.

⁴ En 1964, el precio medio de exportación de la almendra sin descascarar subió a más de 4,5 escudos por kilogramo.

⁵ Con el precio actual de 3 escudos por kilogramo el ingreso medio sería de 2.100 escudos.

¹ No se dispone de estadísticas acerca de la producción mundial. La India, que ocupa el segundo lugar como país productor, exportó 80.000 toneladas en 1964.

superior según su calidad. Hasta mediados del decenio de 1930 en las fincas de no africanos se cultivaba muy poco el anacardo y sólo recientemente, con el aumento de los precios y el establecimiento de fábricas de elaboración, dicha producción ha comenzado a aumentar en forma significativa. En 1960-1961, la producción en tierras de no africanos ascendió a sólo 6.718 toneladas, o sea un 8,3% aproximadamente de la producción total. No obstante, en ese año había 59.963 hectáreas, o sea una sexta parte de la tierra cultivada controlada por no africanos, en que se habían plantado anacardos, y el número de árboles se calculaba en unos 5 millones, de los cuales 3 millones estaban en producción. La mayor parte de esta zona, o sea 50.610 hectáreas, correspondía al distrito de Mozambique.

102. Aunque la mayoría de las grandes empresas agrícolas cultivan hasta cierto punto el anacardo, la producción de no africanos proviene principalmente de predios pequeños o de tamaño medio, donde esos árboles se cultivan conjuntamente con otras cosechas. En 1960-1961 había 199 predios donde se producía anacardo, de los cuales 191 eran, según se informa, propiedad de portugueses o de compañías domiciliadas en Portugal. Dos de las empresas agrícolas más importantes, la José Ferreira dos Santos y la Companhia Agrícola de Angoche, han establecido recientemente sus propias fábricas de elaboración (véase la sección siguiente).

Industria de elaboración

103. En 1964, un 97% aproximadamente, en peso, de todas las exportaciones de anacardo de Mozambique consistía en nueces sin descascarar, y casi en su totalidad se dirigían a la

India para su descascarillado y reexportación. La India goza de este virtual monopolio de la elaboración del anacardo debido a que dispone de una mano de obra abundante y experimentada que permite a los productores indios operar fábricas de descascarillado a mano en gran escala, a un costo por kilogramo de producción que es una tercera parte aproximadamente del de Mozambique³. Además de los elevados costos de producción, los industriales de Mozambique tienen también dificultades para contratar en una zona determinada la gran cantidad de trabajadores que necesitan dichas fábricas, por cuanto la población está dispersa y hay relativamente pocas mujeres africanas que busquen empleo.

104. No obstante, la elaboración local del anacardo antes de la exportación presenta evidentes ventajas económicas para Mozambique, en parte porque haría menor la dependencia de ese Territorio con relación a la India, que es a la vez su principal competidora, y más especialmente porque el valor de exportación de la almendra descascarada y del extracto de la cáscara es aproximadamente un 50% superior, según los cambios de precio, al de la almendra en cáscara. El cuadro siguiente, basado en datos preparados oficialmente⁴, muestra la diferencia entre el valor real del anacardo en cáscara que se exporta y el valor que habría tenido la almendra descascarada y el extracto de la cáscara si el producto hubiera sido elaborado antes de exportar.

³ En 1961-1962 se calculaba que en Goa las trabajadoras especializadas podían producir más del doble que los trabajadores no especializados de Mozambique.

⁴ A. Ramalho Correia, "A industrialização da castanha de Caju", Direcção dos Serviços de Economia e Estatística Geral, Mozambique, 1963.

CUADRO 10

INFLUENCIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ANACARDO

Año	Exportaciones reales de anacardo en cáscara		Valor calculado de exportación de la almendra descascarada y del extracto contenido en la misma ^a	Diferencia
	(Toneladas)	(Millones de escudos)	(Millones de escudos)	(Millones de escudos)
1951	44.100	88,7	179,1	90,4
1952	47.350	134,1	196,6	62,5
1953	55.843	176,6	218,6	42,0
1954	58.892	145,4	186,6	41,2
1955	49.060	127,4	194,6	67,2
1956	37.974	126,4	227,4	101,0
1957	68.231	223,3	389,7	166,4
1958	95.973	253,3	485,6	232,3
1959	61.903	177,0	311,3	134,3
1960	55.848	199,9	339,3	139,4
1961	84.582	315,0	489,9	174,9
1962	80.748	230,9	462,6	231,7

^a Valor calculado a los precios corrientes del mercado.

105. Desde 1932 se han hecho esfuerzos para idear técnicas eficaces de elaboración mecánica del anacardo, que permitan compensar la ventaja competitiva de que goza la industria de la India. El problema técnico más difícil, aunque no el único, era hacer una máquina que quitara la cáscara sin dañar demasiado la almendra. Entre 1932 y 1954, el Gobierno recibió 32 solicitudes para establecer plantas experimentales de descascarillado, pero la mayor parte de las mismas se rechazaron por falta de valor práctico o fracasaron después de breves ensayos. Durante la segunda guerra mundial, cuando se interrumpieron las exportaciones a la India, se hicieron operaciones limitadas de descascarillado a mano, principalmente para abastecer el mercado sudafricano. En 1954 el Gobierno adoptó la política de autorizar únicamente pequeñas instalaciones de descascarillado en ciertos

lugares distantes entre sí y con fines experimentales a fin de dejar el campo abierto a nuevas invenciones y para no afectar desfavorablemente el mercado exterior con exportaciones prematuras de un producto de inferior calidad.

106. En 1959, salvo una pequeña industria de tipo familiar a base del descascarillado a mano en Mozambique septentrional, solamente había dos compañías en funcionamiento, aunque más de 30 solicitudes estaban pendientes. Esas dos compañías, establecidas ambas en Lourenço Marques, eran la Caju Industrial de Moçambique, S.A.R.L. establecida en 1950 y la Industria Nacional de Caju e Derivados, S.A.R.L., denominada posteriormente Sociedade Cajueira Moçambicana, S.A.R.L. Las dos compañías habían sido fundadas originalmente por un colonizador portugués, el Coronel Baldini Vissenjou. Las dos empresas eran

pequeñas, producían en total un máximo 1.900 toneladas al año de anacardo descascarado a mano y tenían primordialmente por objeto mecanizar la elaboración.

107. En 1959, por no haberse podido perfeccionar la elaboración mecánica, el Gobierno cambió de política y decidió aprobar todas las solicitudes a título experimental. Entre 1959 y 1962, 29 empresas nuevas fueron autorizadas para elaborar anualmente de 3.000 a 100.000 toneladas de anacardo cada una.

108. De las compañías autorizadas hasta 1962 son pocas las que siguen funcionando y una tan sólo en la escala prevista inicialmente, la Caju Industrial de Moçambique, que absorbió a otras varias empresas durante el decenio de 1950. En 1962 actuaban cinco compañías, tres de ellas en parte mecanizadas y las otras dos dedicadas al descascarillado manual en pequeña escala. De esas cinco empresas, la más importante empleaba a unas 4.000 mujeres y las dos siguientes por orden de importancia a 500 y 200 respectivamente. La producción combinada de las mismas solamente era unas 2.000 toneladas de almendras descascaradas y 1.340 toneladas de extracto de cáscara de anacardo.

109. Después de 1962, al expandirse rápidamente el mercado mundial del anacardo y subir en general los precios, se intensificaron los esfuerzos para fomentar la elaboración en Moçambique. En los últimos dos años parece haberse dado finalmente un paso decisivo en materia de tecnología y se informa que se han ideado varios procedimientos mecánicos, de origen italiano, sudafricano y portugués, que se consideran satisfactorios. Se dice que con uno de ellos — un invento portugués anunciado en 1965 — se pueden elaborar de 90 a 100 kilogramos de anacardo en cáscara por hora, con lo que se logra en un periodo de 24 horas una producción equivalente a la de 72 trabajadores manuales. Se dice que la proporción de almendras no dañadas es de un 65% como promedio. Esos nuevos inventos allanan el camino para el gran desarrollo de la industria que está ocurriendo en la actualidad (véase los párrs. 128 a 132 *infra*).

110. En julio de 1965 había 11 compañías que tenían permisos para elaborar el anacardo, y su capacidad combinada de producción ascendía en total a 260.000 toneladas de almendras en bruto al año, o sea casi el doble de la producción real. En realidad, sin embargo, sólo funcionaban cinco compañías que se describen a continuación.

a) Caju Industrial de Moçambique

111. Se trata de la empresa de elaboración del anacardo más antigua del Territorio pues se constituyó en 1950 por los socios Baldini Vissenjou y Jiwa Jamal Tharani a fin de explotar el procedimiento mecánico inventado por el primero de ellos. Durante sus diez primeros años de existencia, la compañía llevó adelante un ambicioso programa de expansión, absorbiendo a varias empresas competidoras que se declararon insolventes, con lo que también se vio en dificultades financieras. Pudo continuar sus actividades, no obstante, gracias al apoyo financiero del Banco Nacional Ultramarino, que es ahora su principal accionista y domina su consejo de administración.

112. La compañía tiene su domicilio social y fábrica principal en Lourenço Marques. Además, debido a la escasez de trabajadoras en la zona urbana, tiene siete fábricas subsidiarias de descascarillado manual y mecánico en las cercanías de Lourenço Marques, y en Manhiça y Marracuene. La Caju Industrial controla además otras tres pequeñas compañías en la zona de Lourenço Marques, empresas que si bien no son de propiedad directa de la Caju Industrial, le venden toda su producción a precios fijos. Estas compañías son la Fomento Industrial de Caju, Lda., la Sociedade Cajueira Moçambique, S.A.R.L. y la Fábrica Nacional de Caju, Lda. Esas tres empresas son en realidad filiales de la Caju Industrial, con la que han concertado acuerdos debido a dificultades financieras.

113. En 1961, el activo fijo total de la Caju Industrial era de 26 millones de escudos. Su capacidad de producción má-

xima autorizada es de 15.000 toneladas de almendras en cáscara², producción que casi se alcanzó en 1964 cuando elaboró más de 14.500 toneladas. Se informa que emplea a un total de 4.000 trabajadores manuales y 80 técnicos y que en 1953 pagó 18 millones de escudos en sueldos y salarios. El salario de las trabajadoras manuales en las fábricas satélites es de 345 escudos por mes, de los cuales se deducen cada seis meses 15 escudos (0,50 dólares de los EE. UU.) para la compra de mandiles.

b) Sociedade Industrial de Caju e Derivados (CAJUCA)

114. Esta compañía se constituyó en 1962 para explotar una maquinaria inventada en Italia. La compañía se organizó por empresarios italianos y tiene un capital social de 15 millones de escudos. En la actualidad tiene tres fábricas situadas en Machava (cerca de Lourenço Marques), Antonio Enes (Moçambique) y Mocimboa da Praia (Cabo Delgado). Estas tres fábricas tienen en total una capacidad de producción autorizada de 45.000 toneladas de anacardo en cáscara, pero, según se informa, en 1963 el consumo real de la compañía fue solamente de unas 6.000 toneladas. Ha solicitado recientemente permiso para establecer otra fábrica en Machava, cerca de Lourenço Marques.

c) Companhia Agrícola e Comercial João Ferreira dos Santos

115. Esta compañía, que es una de las empresas agroindustriales más importantes de Moçambique (véase párr. 183) obtuvo en 1960 un permiso para explotar una fábrica de descascarillado manual en Mossuril (distrito de Moçambique), con una inversión de capital de 3.500.000 escudos. En febrero de 1966, según informaciones de prensa, la compañía, junto con otros intereses portugueses, ha obtenido un permiso para establecer cuatro fábricas de elaboración mecánica, con una capacidad combinada de 100.000 toneladas, al norte del Territorio (véase el párr. 131 *infra*).

d) Companhia de Culturas de Angoche, S.A.R.L.

116. Una de las principales productoras de sisal (véanse los párrs. 180 a 182 *infra*); esta compañía solicitó en 1960 permisos para establecer dos fábricas en Antonio Enes y Moma (Distrito de Moçambique). Fue autorizada para elaborar como máximo 10.000 toneladas de almendra en cáscara en cada una de esas fábricas. La producción está en parte mecanizada y el equipo que se utiliza es la misma maquinaria italiana introducida por la CAJUCA. No se dispone de datos relativos a su producción en anacardo descascarado y extracto de cáscara de anacardo.

e) Spence and Pierce, Ltd.

117. Esta compañía, que se constituyó en 1962, es en gran parte propiedad de una empresa británica, la Pierce Leslie and Co., Ltd. que tiene fábricas de elaboración del anacardo en la India. En 1962, la compañía tenía un capital social de 3.200.000 escudos y una fábrica situada en los suburbios de Inhambane con una capacidad máxima autorizada de 2.000 toneladas de almendra en cáscara. Se informó que en 1963 había invertido 1.500.000 escudos aproximadamente y empleaba 600 trabajadores. Posteriormente se aumentó su capacidad autorizada a 25.000 toneladas y en 1964 tenía previsto inaugurar otra fábrica en Maxixe, cerca de Inhambane.

118. Además de las cinco compañías mencionadas, en 1963 se otorgaron otros nueve permisos para explotar fábricas de elaboración del anacardo pero no hay noticias de que hayan comenzado las operaciones o, en algunos casos, de que hayan llegado a constituirse las compañías.

119. Cabe señalar que hasta agosto de 1965, fecha en que se anunciaron nuevos importantes proyectos de fomento del anacardo (véanse los párrs. 128 a 132 *infra*), ninguna de las compañías existentes, salvo la Caju Industrial, estaba funcionando en un nivel suficiente para cubrir su cupo autorizado. El cuadro siguiente muestra la producción y el valor de almendras descascaradas y del extracto de cáscara.

² La producción aumentó recientemente a 25.000 toneladas.

CUADRO 11

MOZAMBIQUE: PRODUCCIÓN DE ALMENDRA DESCASCARADA Y EXTRACTO DE CÁSCARA DE ANACARDO

Año	Producción (en toneladas)		Valor (en millones de escudos)	
	Almendras descascaradas	Extracto de cáscara	Almendras descascaradas	Extracto de cáscara
1955	980	—
1956	1.043	366	22,2	2,0
1957	1.221	783	26,7	4,3
1958	1.215	614	23,5	3,4
1959	1.249	488	29,9	1,7
1960	1.566	441	38,0	2,3
1961	1.442	1.064	34,4	5,4
1962	1.937	1.341	43,9	3,0
1963
1964	2.988	...	84,7	...

Fuente: Mozambique, *Estatística Industrial*, 1956-1963, y *Boletim Mensal de Estatística*, 1964.

Regulación y fiscalización oficiales

120. La reglamentación oficial ha tenido principalmente por objeto fomentar la incipiente industria de la elaboración. La política seguida por el Gobierno hasta 1959 consistió, por una parte, en limitar la duración de los permisos de elaboración del anacardo y el volumen de elaboración de cada empresa a fin de mantener el campo abierto a nuevos descubrimientos en materia de elaboración mecánica. Por otra parte, el Gobierno adoptó medidas con miras a asegurar que las compañías de elaboración contaran con un abastecimiento suficiente de anacardo en bruto a precios controlados.

121. Entre 1951 y 1961, se siguió la práctica de exigir a cada exportador que reservara un porcentaje determinado de sus exportaciones a las compañías existentes según cuotas fijas. El Gobierno señalaba un precio máximo a la industria local, con la salvedad de que si el precio de exportación era más bajo, el precio de la industria debía ser el precio de exportación F.O.B., menos todos los gastos y derechos relacionados con la exportación. Durante algunos años el precio máximo fue inferior al precio medio de exportación y en 1956 se decidió que el precio máximo sería el del valor fiscal de exportación (inferior al precio real de exportación), dando así una ventaja marginal de precios a la industria local.

122. En 1961, se modificó el sistema dando a la industria local el derecho de opción para comprar cualquier cantidad de anacardo a los exportadores si podía demostrar que el precio neto ofrecido por los transportadores locales no era inferior al precio neto de exportación. Esta medida tenía por objeto permitir a las empresas de elaboración seleccionar una almendra de alta calidad y adquirirla en el momento en que los precios de exportación eran bajos.

123. Finalmente, en 1964 se dispuso que todo el anacardo en cáscara quedaba reservado en principio a la industria local y que solamente se autorizarían las exportaciones si las empresas locales de elaboración no declaraban, en un plazo de 24 horas, su intención de adquirirlo a un precio de opción, que se fijó en 20 centavos por kilogramo por encima del precio neto de exportación.

124. Hasta febrero de 1955, la industria local de elaboración no gozaba de ninguna protección arancelaria especial. Con arreglo a un decreto de 1950 (Decreto 38.146, de 30 de diciembre) el anacardo en cáscara o descascarado estaba sometido al mismo

derecho de exportación, consistente en una tasa del 1% *ad valorem* y en una sobretasa del 8,5%. En 1955 la sobretasa sobre el anacardo descascarado se redujo al 6% *ad valorem*, mientras que la sobretasa a la almendra en cáscara se aumentó al 10% (Orden 15.272, 12 de marzo de 1955). En 1960 (Decreto 43.081, 19 de julio) se eximió a la almendra descascarada de todo impuesto de exportación mientras que la almendra en cáscara siguió sujeta a una sobretasa del 2,5% y al impuesto de *sobrevalorização* percibido sobre la diferencia entre los precios corrientes y los de 1949. En julio de 1965, el impuesto de *sobrevalorização* variaba de 479 a 551 escudos por tonelada según los precios en los puertos de embarque.

Exportaciones y lugares de destino

125. El valor total de las exportaciones de anacardo ha aumentado de solamente 41 millones de escudos en 1946 a más de 608 millones de escudos en 1964. Esto representa un incremento en valor de 1.383% en esos 28 años, mientras el volumen ha aumentado en un 245%, explicándose esta diferencia por haberse cuadruplicado los precios. Como muestra el cuadro 13, el aumento más pronunciado tanto en valor como en tonelaje se ha producido desde 1962, con lo que el anacardo ha pasado a ocupar el primer lugar en valor de las exportaciones de Mozambique. Entre las razones de este notable incremento pueden señalarse la expansión del mercado de los Estados Unidos y el resultado feliz de los esfuerzos realizados por la India para diversificar sus exportaciones desarrollando mercados en otros países.

126. Hasta ahora, la industrialización local sólo está en sus comienzos y los productos elaborados representan únicamente una pequeña proporción (10,6% en 1964) del valor total de las exportaciones de anacardo. A base de los precios corrientes de 1963 se estima, sin embargo, que si se elaborara toda la cosecha antes de la exportación sería posible aumentar su valor de exportación de un 30% a un 50%. Los acontecimientos recientes indican que la proporción de las exportaciones de anacardo elaborado ha de aumentar considerablemente en los años venideros. Hasta qué punto puede ello afectar a los precios depende de la elasticidad de la oferta de otros países y de las posibilidades de expansión del mercado mundial, circunstancias que no es posible predecir con exactitud en la actualidad.

127. El cuadro 13 muestra las exportaciones combinadas de anacardo en cáscara y descascarado en los últimos años y los principales países de destino. El cuadro 12 contiene información sobre las exportaciones de almendra descascarada y extracto de cáscara de anacardo. Cabe señalar que más del 90% de los productos elaborados se exportan a los Estados Unidos.

* Circular del 27 de octubre de 1951 expedida conforme a las disposiciones generales de la Orden 10.077 de 24 de abril de 1947. Los porcentajes, cuotas y precios fueron ajustados de tiempo en tiempo por órdenes posteriores.

CUADRO 12

MOZAMBIQUE: EXPORTACIONES DE ALMENDRA DESCASCARADA Y DE
EXTRACTO DE CÁSCARA DE ANACARDO

Año	Volumen de las exportaciones (en toneladas)		Volumen de las exportaciones (en millones de escudos)		Porcentaje del total de las exportaciones
	Almendra descascarada	Extracto	Almendra descascarada	Extracto	
1955	996	304	16,1	1,0	8,5
1956	1.029	377	25,3	1,6	10,1
1957	1.127	639	26,1	3,0	13,5
1958	1.227	230	24,9	1,1	13,8
1959	1.130	485	22,8	2,4	10,6
1960	1.355	990	33,5	4,7	11,3
1961	1.058	963	24,8	4,9	13,5
1962	1.900	1.405	43,4	8,4	10,8
1963	2.685	1.022	61,3	6,5	14,5
1964	3.193	1.263	83,2	11,1	15,5

Fuente: Mozambique, *Comércio Externo*, 1956-1963, y *Boletim Mensal*, 1964.

CUADRO 13

MOZAMBIQUE — ANACARDO: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES LUGARES DE DESTINO, 1955-1964
(Almendra en cáscara y descascarada)

Año	Exportaciones			Principales lugares de destino			
	Millares de toneladas	Millones de escudos	Porcentaje del valor total de las exportaciones	(Porcentaje del volumen de las exportaciones)			
				India	Estados Unidos	Sudáfrica	Portugal
1955	50,1	143,4	8,46	98,00	1,81	0,13	
1956	39,0	151,6	8,74	97,26	2,21	0,31	0,02
1957	69,1	249,4	12,29	97,93	1,35	0,18	—
1958	97,2	278,2	13,71	98,73	1,09	0,13	0,01
1959	63,0	199,7	10,49	94,34	1,47	0,27	0,02
1960	57,2	233,4	11,12	93,71	1,92	—	0,01
1961	85,6	339,7	13,33	97,54	0,99	0,21	0,01
1962	82,4	274,3	10,49	97,59	1,93	0,25	0,01
1963	121,9	465,4	16,07
1964	127,8	608,4	19,99	95,50	1,88	0,19	1,39

Fuentes: 1955-1963: Mozambique, *Comércio Externo*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

Acontecimientos recientes

128. Hasta 1965, la industria de elaboración del anacardo estaba todavía en una fase experimental y, salvo las tres empresas productoras principales: la Caju Industrial, la Spence and Pierce y la Companhia de Angoche, se dedicaba primordialmente al desarrollo de una maquinaria que permitiera la producción en gran escala en una fase ulterior.

129. Según noticias de prensa de 1965, parece que esta fase está llegando a su fin. Se informa que se han ideado varias técnicas mecánicas que se consideran apropiadas para la elaboración en gran escala y que se están construyendo nuevas fábricas para explotar esas técnicas.

130. En agosto de 1965, se constituyó una nueva compañía, la Industrias de Caju Mocitas, con un capital social inicial de 20 millones de escudos, que puede ser aumentado a 85 millones de escudos. El control de la compañía está en manos de la Anglo-American Corporation de Sudáfrica, que suscribió acciones del capital inicial por valor de 11 millones de escudos; tienen también participación la Tiger Oats and National Milling Co., Ltd. de Sudáfrica (5 millones de escudos) y la Industria Prodotti Alimentari da Bologna (4 millones de escudos). La compañía está construyendo una fábrica en Vila de João Belo (dis-

trito de Gaza) con una capacidad inicial de 15.000 toneladas que se aumentará a 30.000. Esa fábrica estará totalmente mecanizada, utilizando maquinaria italiana, y se informa que la inversión total ascenderá a 85 millones de escudos durante la primera fase de su desarrollo y, finalmente, a 170 millones de escudos. Según noticias de prensa, la empresa está considerando la posibilidad de que participe en la misma la Asociación Agrícola de Gaza. Esta última ha preparado un plan, basado en la nueva fábrica, para desarrollar una plantación de 30.000 hectáreas de anacardo en la región de Gaza. De estas tierras, la tercera parte se distribuiría entre miembros europeos de la Asociación, los que recibirían 100 hectáreas cada uno y estarían obligados a bonificarlas por su propia cuenta. Otras 10.000 hectáreas se distribuirían entre soldados-colonos que recibirían 50 hectáreas cada uno. Las 10.000 hectáreas restantes se reservarían para asentamiento de africanos en parcelas de 25 hectáreas por colono. Tanto los soldados-colonos como los africanos recibirían una asignación mensual hasta que comenzara la producción. Toda la producción de anacardo se vendería a la fábrica de Mocita y, a base de una tonelada por hectárea, se calcula que la cosecha valdría 3.000 escudos por hectárea y que los colonos africanos recibirían cada uno 75.000 escudos al año. En el plan se prevé asimismo la construcción de centros médicos, iglesias y escuelas primarias. Se ha propuesto un plan

similar, localizado en el distrito de Mozambique, en el que se prevé distribuir parcelas de 20 hectáreas entre los africanos, dándose preferencia a los que viven ya en la región. En este segundo proyecto se daría a los colonos africanos orientación técnica para la plantación y el cultivo del anacardo y se les prestaría ayuda en la constitución de cooperativas y la adquisición de herramientas.

131. Se supo en febrero de 1966 que la Companhia Agrícola João Ferreira dos Santos se había asociado con la Companhia Textil do Púnguê, filial de la Companhia União Fabril de Portugal, y con la Companhia de Seguros Império, empresa portuguesa de seguros, a fin de ampliar sus operaciones actuales. La compañía, según se informa, ha recibido una nueva cuota de hasta 100.000 toneladas y está estableciendo fábricas en Porto Amelia (distrito de Cabo Delgado), Nampula y Nacala (distrito de Mozambique) y en otra localidad de Cabo Delgado.

132. Por último, la Indústria e Laboração de Produtos Agrícolas (ILPA), compañía portuguesa con participación italiana, ha establecido una fábrica de elaboración en Portugal, que tendrá en su día una capacidad de 20.000 toneladas. En septiembre de 1965, la compañía anunció que tenía la intención de establecer una fábrica semejante en Mozambique.

D. Copra

Generalidades

133. Las plantaciones de azúcar y de coco, productos que constituyen las dos cosechas más antiguas de Mozambique, se iniciaron en la época de las grandes compañías concesionarias. La copra viene exportándose desde la década de 1880, y la extracción de su aceite fue una de las primeras industrias establecidas en el Territorio. El cocotero, que es cultivado en las plantaciones europeas y también por los africanos, que producen un tercio del total de copra, ocupa más del 25% de la superficie total de las fincas no africanas en cultivo, y hasta que empezó a producirse el anacardo era la cosecha comercial permanente más importante de África. Se calcula que en el Territorio hay doce millones de cocoteros, avaluados en 1.500 millones de escudos. Aparte de la cantidad indeterminada de cocos que retienen los africanos para su propio consumo, el producto principal es la copra, parte de la cual se destina a los molinos aceiteros locales y a las fábricas de jabón; el resto se exporta casi todo a la Europa occidental. Hay también una producción — muy modesta — de fibra de coco para el mercado local.

134. Como las estadísticas sobre las ventas de los africanos se consignaron por años civiles, y la producción de las explotaciones no africanas se registra por años de cosecha, es difícil calcular la producción total del Territorio. Suponiendo que la producción total es igual al volumen de las exportaciones más la cantidad vendida a la industria local, Mozambique figuraba en 1962 en séptimo lugar entre los países productores de copra, aunque su parte en la producción y en las exportaciones mundiales representó sólo el 1% y el 4,3% respectivamente. En la década de 1940 la copra fue en valor la tercera cosecha de exportación de Mozambique. Hoy figura en quinto lugar, debido al reciente desarrollo del cultivo del anacardo y el sisal y a la constante baja de los precios mundiales de la copra desde 1959. En 1964 las exportaciones de copra representaron 208.300.000 escudos, o sea el 6,9% de las exportaciones visibles del Territorio. El valor del aceite de copra exportado aumentó de 16 millones de escudos en 1960 a 62 millones en 1961, de resultas de la contracción del mercado para la copra en bruto, que condujo a un aumento de las exportaciones de aceite.

135. Los cocoteros se cultivan en el litoral hasta unos 15 ó 20 kilómetros tierra adentro, desde Inhambane hacia el norte, casi hasta la frontera de Tanzania. La principal zona productora está entre la desembocadura del río Zambezi y Antonio Enes en el distrito de Cabo Delgado; varias de las mayores plantaciones del mundo se encuentran alrededor de Quelimane y en las *circunscrições* de Namacurra, Maganja da Costa y Pebane. Más de la mitad de la superficie de las plantaciones propiedad de europeos y otros no africanos se halla en el distrito de Zambézia; casi todas las restantes

están en los distritos de Mozambique y Cabo Delgado. La mayoría de las plantaciones propiedad de africanos están en el distrito de Zambézia.

Organización de la producción

a) Generalidades

136. Las plantaciones europeas de cocoteros producen hoy alrededor del 70% de la copra, y las africanas el 30% aproximadamente. Esta proporción variaba en otras épocas, porque la producción de las plantaciones europeas seguían muy de cerca las tendencias generales del mercado mundial. Así, debido a la crisis económica mundial, las plantaciones europeas se redujeron de 67.152 hectáreas en 1929-1930 a 56.066 hectáreas en 1939-1940, período durante el cual no se renovaron los cocoteros viejos. A partir de 1940, se comenzó a plantar de nuevo, al recobrase los precios, y la superficie en cultivo aumentó a 69.035 hectáreas en 1950-1951 y a 82.622 diez años después. En 1958-1959, la producción europea de copra fue de sólo 25.735 toneladas, pero en 1960-1961 había subido a 32.806.

137. En la producción africana de copra parece que los precios influyen menos que la demanda de cocos como cosecha alimenticia. Durante la década de 1930 los africanos siguieron plantando y cosechando a pesar de la baja de precios, y su producción aumentó constantemente hasta mediado el decenio de 1950. Según se ha informado, en la actualidad los europeos poseen cerca de 8 millones de cocoteros y los africanos de 5 millones a 5.500.000, lo cual representa, respecto del año 1930, un aumento de unos 2 millones de árboles para los europeos y de 1.500.000 árboles para los africanos. En 1950 se calculó que las explotaciones europeas y africanas abarcaban en conjunto de 120.000 a 130.000 hectáreas.

b) Producción de las explotaciones europeas

138. De los 8 millones de cocoteros que hay en las explotaciones europeas, cerca de un millón son propiedad de agricultores de categoría intermedia, y el resto pertenece a grandes empresas. Alrededor del 86% de la superficie destinada al cultivo del coco en el distrito de Zambézia, es decir, cerca de la mitad del área total plantada por europeos, pertenece a tres grandes compañías: la Companhia do Boror, S. A. R. L., con unos 2.100.000 cocoteros en producción; la Sociedade Agrícola do Madal, S. A. R. L., con 1.300.000 árboles, y la Companhia da Zambézia, con unos 800.000.

139. La propiedad de estas compañías es mixta: tienen capital francés, alemán y noruego, además de portugués.

140. Las plantaciones suelen ser grandes, por el espacio considerable que ha de haber de un árbol a otro. La copra se seca en estufas de aire caliente o al sol, y se clasifica en *extra fair middling* y *hot air dried* (H. A. D.); queda bien seca, con baja proporción de humedad, sin impurezas, y de buena calidad. En las plantaciones se emplea un número creciente de cabezas de ganado para abonar la tierra, mantener despejado el espacio entre árboles (a fin de prevenir los incendios de maleza), como medio de transporte dentro de la plantación y para arar los campos. En gran parte la superior calidad de los cocos cultivados en las plantaciones europeas se atribuye a esa fertilización y "limpieza" hechas por el ganado. En 1944 sólo había 22.000 cabezas de ganado registradas en la comarca entre Chinde y Pebane, pero según informes en 1960 la Companhia do Boror por sí sola poseía 22.000; la Sociedade Agrícola do Madal, 13.000, y la Companhia da Zambézia, 6.500.

i) Companhia do Boror, S. A. R. L.

141. No hay información acerca del capital o la propiedad actuales de la Companhia do Boror; por lo menos hasta finales de la segunda guerra mundial la propiedad era primordialmente alemana.

142. Entre las más antiguas empresas agrícolas de Mozambique, la Companhia do Boror es la mayor productora

de copra y sisal (véase la sección E, *infra*), y tiene 27.000 hectáreas de plantaciones de cocoteros. Recientemente, su producción era en promedio de 11.000 toneladas de copra al año, lo que viene a ser un tercio de la producción total de las explotaciones europeas. Además, la compañía es la mayor explotación ganadera de Mozambique, y hasta hace poco era la única productora de fibra de coco, de la que extrae una modesta cantidad que se vende localmente, sobre todo para fabricar colchones.

143. La sede de la compañía está en Macuse (Zambézia), y sus plantaciones se hallan en Namacurra, Maganja da Costa, Pebane, Quelimane (todas en el distrito de Zambézia), Noma y Antonio Enes (distrito de Mozambique).

144. La compañía recibió su concesión primitiva en 1898, de la Companhia da Zambézia. Se desconoce el tamaño de la concesión primitiva, que abarcaba los antiguos *prazos* de Borror, Tirre, Nameduro, Macuse y Lecungo. Además, de sus plantaciones de cocoteros — una de las cuales es la mayor del mundo — la compañía hoy posee 11.000 hectáreas dedicadas al sisal. En 1948 la compañía daba empleo a 5.000 de los 20.000 africanos que viven en sus concesiones.

ii) *Sociedade Agrícola do Madal, S. A. R. L.*

145. La Sociedade Agrícola do Madal, con un capital de 85 millones de escudos, primordialmente noruego, es la segunda productora de copra de Mozambique. Fundada en 1904 por inversionistas portugueses y franceses, la compañía recibió una concesión de 280.000 hectáreas en la región de Zambézia, que consta de los antiguos *prazos* de Madal, Tangalane, Cherengeme y Mahendo. De 1912 a 1946 la compañía cambió varias veces de propiedad, y en 1946 fue reorganizada y convertida en sociedad por acciones con la denominación que hoy tiene.

146. En 1940 se informó que la compañía poseía 21.078 hectáreas de tierras en el distrito de Zambézia, de las que sólo una parte se dedica al cultivo de cocoteros. [En 1948 se comunicó que las compañías de Madal y Zambézia (véase más adelante) tenían conjuntamente 13.000 hectáreas de plantaciones de cocoteros.] Sus cocoteros — 1.300.000 — están distribuidos entre 28 plantaciones de Quelimane, Chinde y Maganja da Costa. En 1962 se otorgaron en Chinde dos nuevas concesiones, por un total de 3.400 hectáreas. La compañía da trabajo a 5.000 africanos y 200 europeos.

iii) *Companhia da Zambézia*

147. La Companhia da Zambézia, sucesora de la sociedad concesionaria establecida en 1892, se reconstituyó en 1940 formando una sociedad limitada dedicada a la agricultura, y hoy tiene un capital de 60 millones de escudos. El Gobierno portugués, que posee 135.000 acciones, es el mayor accionista; las acciones restantes son, según se cree, propiedad de intereses sudafricanos, franceses, alemanes y británicos. Además, la compañía produce té (véase la sección F) y sal, tiene 6.500 cabezas de ganado, y hasta 1963 tenía una concesión para la compra de algodón en el distrito de Tete (véase el párr. 28, *supra*).

148. En la actualidad la compañía pasa por ser la tercera productora de copra de Mozambique. En 1965 se informó que tenía 4.500 hectáreas de plantaciones. Su producción de copra fue de 3.014 toneladas en 1960, 3.081 en 1962, 3.388 en 1963 y 3.355 en 1964.

149. La compañía explota plantaciones de cocoteros en Angoase y Andone (500.000 árboles) y en Bajone (210.000 árboles); esta última plantación es la más reciente y ya va dando más rendimiento. En 1962 y 1963 las utilidades de las plantaciones de Angoase y Andone (incluida la producción de sal y ganado) ascendieron a 1.975.051 y 1.863.513 escudos, respectivamente; las de la plantación de Bajone en dichos dos años representaron 136.369 y 1.153.274 escudos.

150. Pese a las utilidades que obtuvo de su producción de copra y té, la compañía sufrió una pérdida en sus operaciones combinadas en 1962 y 1963, debido sobre todo a pérdidas

en su concesión algodonera. En 1964, después de abandonar esta última, la compañía notificó un beneficio neto global de sólo 959.000 escudos. No se especifican los resultados de sus operaciones de copra en 1964.

151. Los costos totales de mano de obra en las plantaciones de la compañía Zambézia (incluso las de té) ascendieron a 12.979.175 escudos en 1962 y a 13.033.005 en 1963. La compañía tiene su propio hospital, con 12 salas y farmacia, y proporciona servicios médicos gratuitos a los empleados y sus familias.

c) *Producción africana*

152. Según un autor, el interés africano por el cultivo del cocotero es resultado de la industria europea y data del establecimiento de las grandes plantaciones. En los primeros tiempos, las zonas elegidas por los europeos para cultivar el cocotero eran tierras no cultivadas y de escasa población. Para promover el asentamiento de africanos en comarcas lindantes con las plantaciones y obtener así la mano de obra necesaria, las empresas europeas ofrecían a los indígenas cocoteros jóvenes para que los trasplantasen en sus tierras. Al parecer la práctica subsiste: los africanos reciben plantones suministrados por las compañías, que mantienen viveros especialmente para ese fin. La copra producida por los africanos suele secarse al sol y se vende a tratantes, aunque cierta cantidad suele venderse sin secar a las plantaciones.

153. En 1965 se comunicó que 300.000 africanos se dedicaban a la extracción de copra, produciendo por sí solos un tercio de la cosecha de exportación. A partir de 1950 la producción africana de copra ha sido en promedio de 12.000 toneladas anuales, variando de las 16.000 toneladas de 1956 a las 10.227 de 1963. Estas cifras se refieren sólo a ventas documentadas y, según un artículo publicado en 1958 por la *Revista do Centro de Estudos Económicos* de Mozambique, es posible que subestimen el volumen real de la producción africana de copra⁴.

154. El número de cocoteros propiedad de africanos aumentó continuamente hasta la década de 1950. Según el censo agrícola de 1929-1930, los africanos poseían 3.676.372 cocoteros; en 1939-1940 sus explotaciones se calculaban en 4.771.588 cocoteros, y a mediados de la década de 1950 se comunicó que poseían de 5 millones a 5.500.000, que es aproximadamente la cifra que hoy se calcula.

155. Ya en 1940 se preveía que no se harían nuevas plantaciones, pues se había comunicado oficialmente que "las mejores tierras para la plantación fácil del cocotero están ya en uso, o más o menos ocupadas". Se observó también que la densidad de la población africana en la zona litoral al norte del río Zambeze crecía constantemente y había alcanzado un índice más alto que las regiones no productoras de copra. En 1958 se volvió a informar que la cantidad de cocoteros propiedad de africanos sólo se veía limitada por la escasez de tierras adecuadas, ya que los africanos de Zambézia intentaban siempre aumentar el número de sus árboles plantándolos dondequiera que dispusiesen de tierra⁵. Para dejar más espacio a las plantaciones de cocoteros, en 1940 se propuso la desecación de vastas zonas pantanosas a lo largo de la costa del distrito de Zambézia, proyecto que se estimó fácil y no demasiado caro. Los terrenos así bonificados podrían parcelarse para que los africanos los ocuparan y plantasen. En 1959 se incluyeron créditos en el presupuesto del Segundo Plan

⁴ El artículo indica que de 1953 a 1955 las exportaciones anuales de copra arrojaron unas 6.174 toneladas más de lo que cabría esperar sumando la producción de las plantaciones europeas y las ventas comunicadas por los africanos, en tanto que el promedio de las exportaciones entre los años 1941 y 1953 fue de 3.949 toneladas más. El autor atribuye la diferencia a las ventas no documentadas de los africanos; de ser así, el valor de la copra vendida por los africanos en 1951, por ejemplo, habría sido de 90.858.000 escudos en vez de los 62.626.000 mencionados en la información respectiva.

⁵ *Revista do Centro de Estudos Económicos*, Lourenço Marques, 1958.

de Desarrollo para el drenaje de esas zonas así como de las zonas de Gaza y de Inhambane, asignándose un total de 100 millones de escudos para todas esas obras.

156. Los métodos africanos de cultivo son menos científicos que los de las grandes plantaciones europeas. En contraste con las explotaciones de las grandes compañías, en las que los cocoteros están ampliamente espaciados y alineados y se hace pastar al ganado para obtener abono y combatir la maleza, en las de los africanos los árboles suelen estar plantados muy juntos y al azar, lo que dificulta el buen mantenimiento de la plantación; el número de animales que pasta es insignificante, y no es raro que se produzcan incendios, que empiezan en la maleza.

157. La mayoría de la copra producida por africanos se seca al sol, o directamente al fuego. Esta copra se denomina "fair middling" (F. M.), "seleccionada" o de segundo grado, y se dice que contiene más humedad e impurezas que la copra producida en las plantaciones de las grandes compañías, por lo cual pierde peso al evaporarse y está expuesta a enmohecerse. En 1944 se comunicó que los tratantes que compran copra a los africanos secaban a veces la copra nuevamente en sus propios hornos.

158. Los cuadros 14A y B indican la producción de copra obtenida en explotaciones europeas y las ventas documentadas de la de explotaciones africanas, en la medida en que se ha podido disponer de esta información separada.

Aceite de copra y fibra de coco

159. En 1962 había quince compañías que se dedicaban a la extracción de aceites vegetales, con una inversión total de capitales que ascendía a 80.358.000 escudos. Estas empresas extraen el aceite de diversas semillas oleaginosas, sobre todo del algodón y del maní, y producen aceites comestibles y no comestibles, así como tortas oleaginosas. Las compañías se organizaron en una entidad denominada Grêmio dos Industriais de Óleos Vegetais, creada en 1949.

160. La cantidad de copra que se utiliza para fabricar aceite en Mozambique ha variado bastante con el precio de exportación de la copra en bruto; el volumen del aceite de copra producido osciló entre 10.200 toneladas en 1957 y sólo 3.100 en 1960. La copra empleada es en su mayoría la de calidad F. M., que producen principalmente los africanos, y suele representar la mitad de la cantidad total que se les compra (8.000 toneladas de copra en bruto producen 5.000 toneladas de aceite). Casi todo el aceite se exporta, reservándose una pequeña cantidad para uso local y venta a fabricantes de jabón.

161. Según se explica en la sección siguiente, de 1954 a 1961 se aplicaron a la copra de calidad F. M. impuestos de exportación más altos que a otras calidades, con el fin de asegurar el suministro a las fábricas de aceites. Pero en la práctica se produce menos aceite de copra que de otras semillas oleaginosas. En 1964, se exportaron 8.400 toneladas de aceite de copra, por un valor de poco más de 62 millones de escudos (véase el cuadro 15B).

162. Hay también una producción muy modesta de fibra de coco, que se utiliza sobre todo en la fabricación de colchones para el mercado nacional. Hasta hace poco la única empresa productora era la Companhia do Boror, pero en 1965 se anunció que iba a establecerse una fábrica en Inhambane, a la que seguirían tres más en otros puntos del país. La primera fábrica la financia en parte Sudáfrica, y empresas sudafricanas han garantizado la compra de la mitad de su producción.

Reglamentación y control oficiales

163. La reglamentación oficial de las exportaciones de copra tiene sobre todo el fin de garantizar un adecuado sumi-

nistro de copra en bruto a las industrias locales y de la metrópoli. Hasta 1954 se exigía a todos los exportadores vender un porcentaje de sus cupos de exportación a las fábricas de aceite locales y portuguesas, a precios fijados oficialmente, que eran inferiores a las cotizaciones internacionales. Este sistema fue satisfactorio para la industria aceitera local hasta 1949, fecha en que las fábricas de aceite de Europa, ya recobradas de los efectos de la segunda guerra mundial, fueron causa de que los exportadores aceiteros de Mozambique empezaran a experimentar una disminución de la demanda. Para sostenerse, la industria aceitera de Mozambique pidió precios más beneficiosos en la compra de la copra local. Esto condujo al régimen diferencial de impuestos adoptado en 1954, que se describe a continuación.

164. Según la legislación de 1950 y 1953 (Decreto 38.146, del 30 de diciembre de 1950; Decreto 39.265 y Orden 14.447, de 6 de julio de 1953), todas las exportaciones de copra estaban sujetas a un derecho uniforme del 1% *ad valorem*, a un recargo del 7%, y a un *imposto de sobrevalorização* del 25% del exceso de los precios reales sobre los que prevalecían en 1949. Las exportaciones de aceite de copra estaban sujetas al derecho ordinario del 1% *ad valorem*, más un recargo del 4,5%.

165. La nueva legislación de 1954 (Orden 14.892, de 31 de mayo) introdujo el régimen que siguió en vigor por seis años, consistente en aplicar a las exportaciones de copra de calidad F. M., producida principalmente por los africanos, impuestos mayores que a las demás calidades, producidas en las plantaciones europeas; de esta forma se lograba que la copra de calidad F. M. se utilizase casi exclusivamente para satisfacer la demanda de las fábricas de aceite locales. En virtud de esta legislación, toda la copra de calidad F. M. quedaba exenta del *imposto de sobrevalorização*, pero el recargo se aumentó al 10% *ad valorem*, es decir, un 3% más que el aplicado a otras calidades de copra. En 1960, al suspenderse el recargo aplicado a las exportaciones de copra (Orden 7.797, de 6 de julio), se aumentó al 11,3% *ad valorem* el recargo a la copra de calidad F. M. destinada a países extranjeros.

166. La diferencia entre los impuestos aplicados a la exportación de copra de calidad F. M. y de otras calidades quedó abolida en 1961. La legislación respectiva (Orden 18.203, de 28 de enero de 1961) especificaba que el recargo aplicado a las exportaciones de copra de calidad F. M. debía reducirse en la medida necesaria para que la suma de los gravámenes impuestos a la exportación de copra F. M. no rebasase la suma de los aplicados (incluso el *imposto de sobrevalorização*) a otras calidades de copra.

167. En 1965 (Orden Ministerial 2, de 11 de diciembre), la copra quedó exenta del pago del *imposto de sobrevalorização*.

Producción y exportación

168. Según hemos dicho, a lo largo de los años la industria de la copra se ha visto adversamente afectada por la inestabilidad de los mercados mundiales, sobre todo porque el cocotero madura despacio y la producción no puede responder rápidamente a los cambios de precio. Durante la década 1930, en que los precios mundiales se desplomaron, la producción y la replantación en las explotaciones europeas se restringió mucho. Entre 1940 y 1963, el precio de la copra de calidad H. A. D. subió a más del doble, y la industria volvió a expandirse, pero sólo para encontrarse con grandes fluctuaciones de precio. Como reflejo de esos cambios, la modalidad de la producción y de las exportaciones ha sido irregular: después de alcanzar las 46.874 toneladas en 1949, las exportaciones bajaron a 36.554 en 1954, para volver a subir a 45.507 en 1957 y — tras otro bajón — a 60.070 en 1960. Después de 1959 los precios internacionales bajaron nuevamente y las exportaciones disminuyeron a 43.812 toneladas en 1964. En los cuadros 14A y B se indica la modalidad de la producción de copra en los últimos años, tanto la procedente de las plantaciones europeas como la comprada a los africanos. Sólo ha podido obtenerse información para ciertos años hasta 1960-1961.

CUADRO 14

PRODUCCIÓN DE COPRA

A. Producción de las plantaciones europeas

Año de cosecha	Superficie cultivada (hectáreas)	Número de cocoteros	Producción (en toneladas)	Valor (en millones de escudos)
1955/1956	77.341	7.347.309	28.742	79,4
1956/1957	79.848	7.605.298	28.691	79,1
1957/1958	26.966	...
1958/1959	82.362	7.693.189	25.735	69,4
1959/1960	83.288	7.603.641	28.943	78,8
1960/1961	82.622	7.804.639	32.961	88,2

B. Ventas documentadas de los africanos

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
Toneladas	16.362	16.395	14.078	10.556	10.413	9.958
Valor (en millones de escudos)	47,8	47,2	...	44,3	36,3	26,6

Fuente: Mozambique, *Estatística Agrícola*, 1955-1963.

169. Sólo una fracción de las exportaciones de copra y aceite de copra suele ir a Portugal, con la importante excepción del año 1960, en que Portugal adquirió el 25% de dichas exportaciones. Los principales mercados de copra en estos últimos años han sido Noruega, Israel, Francia, España y Alemania Occidental. En 1961, por ejemplo, fecha en que se exportaron 60.070 toneladas, 13.445 fueron a Dinamarca, 12.095

a Noruega, 8.113 a Israel, y 5.736 a Italia. El aceite lo compran sobre todo Sudáfrica, Alemania Occidental y Rhodesia del Sur. El bagazo que queda de la extracción de aceite se exporta también en modestas cantidades (unas 2.000 toneladas anuales), sobre todo a países del norte de Europa, donde sirven de forraje para el ganado. En los cuadros 15A y B se dan datos sobre las exportaciones y los principales países de destino.

CUADRO 15

MOZAMBIQUE — COPRA Y ACEITE DE COPRA: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, 1955-1964

A. Copra

Año	Miles de toneladas	Exportaciones		Principales países de destino (% del volumen de exportaciones)						
		Millones de escudos	% del valor total de las exportaciones	Noruega	Francia	Portugal	Dinamarca	España	República Federal de Alemania	Israel
1955	34,8	140,2	8,26	19,56	39,24	16,47	—	8,61	8,40	—
1956	41,4	166,3	9,58	30,69	23,03	11,98	—	13,67	12,41	—
1957	45,5	172,8	8,51	31,31	25,48	16,83	4,06	5,00	7,39	—
1958	44,4	189,3	9,33	33,32	10,58	3,40	1,79	7,55	16,04	5,45
1959	37,6	211,0	11,08	27,86	8,77	8,66	11,30	3,30	6,10	3,99
1960	40,7	194,3	9,26	24,78	7,62	25,94	5,31	4,11	2,54	13,74
1961	60,1	266,9	10,47	20,13	6,80	5,32	22,40	8,18	3,50	13,51
1962	52,8	204,5	7,82	13,69	12,10	15,65	14,38	17,84	3,29	14,83
1963	46,4	204,0	7,04
1964	43,8	208,3	6,84	13,69	12,10	15,65	14,38	17,84	3,29	14,83

B. Aceite de copra^a

Año	Exportaciones			Principales países de destino (% del volumen de exportaciones)				
	Miles de toneladas	Millones de escudos	% del valor total de las exportaciones	Sudáfrica	Federación de Rhodesia y Nyasalandia	Portugal	Países Bajos	Malawi
1961	3,2	22,9	0,90	33,82	15,32	10,12	7,78	—
1962	3,2	21,1	0,81	65,40	32,31	2,16	—	—
1963	9,7	63,9	2,21
1964	8,4	62,1	2,04	35,99	12,75 ^b	1,19	—	0,71

Fuentes: 1955-1963: Mozambique, *Comércio Externo y Anuário Estatístico*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

^a Sólo se dispone de datos de 1961 en adelante.

^b Esta cifra se refiere solamente a Rhodesia del Sur.

E. Sisal

Generalidades

170. El cultivo del sisal fue introducido en Mozambique desde Tanganyika a comienzos del siglo veinte. Aunque en 1910 se exportaron 34 toneladas, la producción de sisal no comenzó realmente hasta el decenio de 1920. En 1938 las exportaciones habían aumentado a 24.000 toneladas, cifra que representó el 7,8% de la producción mundial, convirtiendo a Mozambique en el cuarto productor. Durante la segunda guerra mundial la demanda del sisal aumentó muchísimo; no obstante, las exportaciones de Mozambique en 1942 sólo alcanzaron a la mitad de su nivel de antes de la guerra, porque las Potencias aliadas se negaron a extender certificados de navegación a siete de las principales plantaciones, de propiedad alemana. Aunque la Junta de Exportación consiguió celebrar con la United States Commercial Company un contrato, con vigencia de 1943 a 1945, para la compra de sisal de las plantaciones que anteriormente no podían obtener "navicerts", Mozambique ya no pudo ocupar su posición destacada en la producción de sisal. Durante este período, Angola y Brasil, en otro tiempo productores menos importantes, habían aventajado constantemente a Mozambique en cuanto al volumen de producción, desplazándolo al sexto lugar entre los países productores, puesto que ocupa actualmente. La producción de sisal no superó su nivel de la preguerra hasta 1955, año en que se cosecharon 20.103 toneladas. Pero desde entonces no ha crecido mucho, por tratarse de un cultivo sujeto a grandes fluctuaciones de precio en el mercado mundial, en especial a causa de la competencia de otras fibras duras.

171. Actualmente Mozambique produce 30.000 toneladas anuales de sisal, menos de la mitad de la producción de Angola y la décima parte del sisal producido en Africa. Salvo una pequeñísima cantidad reservada para la fabricación nacional de cuerda (79 toneladas en 1962), hasta la fecha casi todo el sisal es exportado, en su mayor parte hacia mercados fuera de la zona del escudo. No obstante, en 1965 se constituyó una nueva compañía para la industrialización del sisal en gran escala, cuyo objetivo a largo plazo es satisfacer la demanda de cuerda del Territorio y exportar solamente el producto manufacturado. En 1964, las exportaciones de sisal, que sumaron 31.581 toneladas, fueron valoradas en 274 millones de escudos, o sea el 9% del valor global de las exportaciones visibles del Territorio.

172. A no ser una plantación aislada situada tierra adentro cerca de Vila Pery (distrito de Manica e Sofala), el sisal se cultiva en una franja de tierras bajas a lo largo de la costa. La mayoría de las plantaciones están en los distritos de Mozambique (entre Antonio Enes y Moma) y de Zambézia (entre Namacurra y Macuba), también se las encuentra muy al Norte en Cabo Delgado (principalmente entre Porto Amélia y Mocimboa da Praia) y muy al Sur en Inhambane. La superficie total cultivada en 1961-1962 era de 56.403 hectáreas, de las cuales el 50% en el distrito de Mozambique, el 28% en el de Zambézia y el 13% en el de Cabo Delgado.

Organización de la producción

173. Debido a las enormes inversiones de capital necesarias*, hasta ahora el sisal se ha cultivado exclusivamente en explotaciones no africanas, constituidas por grandes plantaciones.

* La producción rentable del sisal exige grandes plantaciones, pues cada hoja sólo produce del 3% al 6% de fibra por peso. Por ejemplo, para producir 2.000 toneladas de sisal se requiere una plantación de 2.000 hectáreas, considerándose antieconómicas las menores de 1.000. En 1957 se estimó que las inversiones necesarias por plantación de 2.500 hectáreas antes de la producción eran de 38 millones de escudos. Los mayores gastos los constituyen el sistema interno de transporte, una fuerza de trabajo numerosa (1.400 a 1.500 trabajadores), los almacenes y las instalaciones de descortezamiento. Además, debido a la corta vida de la planta del sisal (unos ocho años), anualmente hay que replantar aproximadamente una décima parte de la superficie cultivada con objeto de mantener un nivel de producción constante. (Según el reglamento del sisal de 1939, sólo los cultivadores que producían más de 25 toneladas podían obtener licencia de exportador.)

La superficie cultivada de sisal en 1961-1962 (véase *supra*) representó el 15% de la superficie total de las tierras cultivadas de las explotaciones agrícolas no africanas. Según datos comunicados, 18 compañías cultivan el sisal, siendo las mayores la Companhia do Boror, la Companhia de Culturas de Angoche, S. A. R. L. y la Companhia Agrícola João Ferreira dos Santos. Estas tres empresas se dedican también a otros cultivos; la primera es la principal productora de copra y las otras dos producen también anacardo, cultivos ambos que se describen en las secciones correspondientes del presente estudio. En 1962 las 18 compañías productoras de sisal explotaban 19 fábricas de descortezamiento, situadas en las plantaciones para convertir la hoja en fibra y en productos derivados exportables tales como estopa y desechos. En 1959 se estimó que había 400 millones de escudos invertidos en fábricas de descortezamiento.

174. No se puede establecer fácilmente quiénes son los propietarios reales de estas empresas. Inicialmente, intereses alemanes, suizos y británicos poseían gran parte del capital, pero esta situación ha cambiado mucho desde la segunda guerra mundial. En 1960-1961 se comunicó que el 76% de las plantaciones pertenecían a nacionales portugueses o a sociedades registradas en Portugal, pero sin que todo su capital estuviese necesariamente en manos portuguesas. Esto suponía un aumento del 3% para el capital nominalmente portugués en relación con el año anterior, confirmando así los informes de que al menos desde el decenio de 1950 ha habido tendencia a ampliar la participación de los capitales portugueses en la industria del sisal. Así, según un comunicado de prensa, en 1965 se promulgó una disposición legislativa por la cual se autorizaba al Gobernador General a garantizar la concesión de préstamos a pequeños productores portugueses de sisal (*sisa-leiros nacionais*) instalados recientemente en el distrito de Mozambique para intentar "despojar a las grandes compañías, de capital principalmente extranjero o con participación del mismo, de su monopolio del sisal".

175. En 1951 se comunicó que había 29.285 africanos empleados en las plantaciones de sisal, 6.000 menos que la cantidad necesaria. Una de las dificultades que, según se dice, obstaculiza el reclutamiento de una fuerza de trabajo adecuada, es el carácter penoso de algunos tipos de faenas, entre ellas el corte de la hoja y el transporte a hombro de grandes fardos de hoja hasta los servicios de transporte. Al contrario de Angola y Tanganyika, donde los contratos de trabajo son de 12 ó 18 meses, en Mozambique sólo duran seis meses, creando así el problema adicional de contar con una fuerza de trabajo suficiente.

176. A fin de estabilizar la fuerza de trabajo y proporcionar un incentivo a los trabajadores para que rebasen su cuota de producción diaria o semanal, se han adoptado varias medidas, incluido el suministro de vivienda permanente a los africanos y a sus familias en las plantaciones. En 1961 se comunicó que a todos los trabajadores se les proporcionaba algún tipo de vivienda, y que los que decidían establecerse permanentemente en una plantación recibían una casa por valor de 24.000 escudos, junto con dos hectáreas de tierra para uso propio y semillas gratis. Durante los seis meses del año en que no trabajan bajo contrato, los trabajadores tienen todo el tiempo libre para dedicarse al cultivo privado.

177. Otro rasgo de la industria del sisal es el sistema de premios, con arreglo al cual los africanos reciben bonificaciones en efectivo si producen más de lo que sus tareas les exigen.

178. Aparte de la fuerza de trabajo empleada en las plantaciones, 4.737 africanos trabajaron en fábricas de descortezamiento durante 1962 y ganaron en total 15.591.309 escudos en concepto de salarios.

a) Companhia do Boror, S. A. R. L.

179. La organización de esta compañía se describe en la sección D precedente (párrs. 141 a 144). Además de sus extensas plantaciones de cocoteros, la compañía tiene 11.000 hectáreas sembradas de sisal, de las cuales probablemente sólo una parte se encuentra en producción, pues la obtención anual de sisal de

la compañía es de 3.000 toneladas. Por la superficie dedicada al sisal, la compañía es la principal del país, ocupando el 35% de la superficie total dedicada a este cultivo. Las plantaciones están situadas en el distrito de Zambézia, principalmente en Naciaia, donde en 1961 había 10.500 hectáreas cultivadas.

b) *Companhia de Culturas de Angoche, S. A. R. L.*

180. Importante productora de sisal, la Companhia de Culturas de Angoche, S. A. R. L., es una de las principales del distrito de Mozambique. Es sabido que sus plantaciones, situadas en las regiones de Antonio Enes, Moma y Monapo, abarcan por lo menos 68.700 hectáreas (18.700 en Angoche y 50.000 en Moma), de las cuales 7.800 estaban sembradas de sisal en 1957-1958. La compañía explota también fábricas de descortezamiento de anacardo (véase la sección C *supra*). En 1956 la compañía empleaba a 5.000 africanos en sus plantaciones de Netiri, Sawara y Mecuco. Se desconoce la producción total. La plantación de Mecuco, abierta en 1948 con un costo de 50 millones de escudos, produce 3.800 toneladas anuales.

181. Conocida inicialmente con el nombre de Companhia Colonial de Angoche, Lda., esta empresa fue transformada en 1962 en una sociedad de responsabilidad limitada con un capital de 50 millones de escudos, habiéndose quedado la sociedad madre con acciones valoradas en 48.745.000 escudos. Se informa que la compañía es principalmente de propiedad suiza.

182. Los beneficios de la compañía en 1962 sumaron 2.794.071 escudos, de los cuales se distribuyeron 2.500.000 a los accionistas en forma de dividendo al 5%.

c) *Companhia Agrícola João Ferreira dos Santos*

183. Tercera productora del país, la Companhia Agrícola João Ferreira dos Santos fue fundada en 1897 por la familia Dos Santos, que todavía la controla. El capital de la compañía es enteramente portugués y tiene su sede en Mozambique. Hasta 1965 la organización João Ferreira dos Santos era conocida bajo el nombre de Companhia Agrícola e Comercial João Ferreira dos Santos, y tenía un capital registrado de 100 millones de escudos. Se trataba de una sociedad de fines diversos, que combinaba la agricultura con la transformación de productos agrícolas (elaboración de sisal, algodón y arroz) y el comercio general. Pero en 1965 la organización fue dividida en tres partes: la Companhia Comercial João Ferreira dos Santos, con un capital registrado de 100 millones de escudos, que se hizo cargo de las actividades comerciales; la Companhia Agrícola João Ferreira dos Santos, con un capital registrado de 10 millones de escudos, dedicada principalmente al cultivo del sisal; y la Companhia Industrial João Ferreira dos Santos, con un capital registrado de 7.500.000 escudos, dedicada sobre todo a desmotar algodón y descascarar arroz. No se dispone de otros datos acerca de sus finanzas.

184. La sede de la compañía está en el distrito de Mozambique, y sus plantaciones de sisal en Muchelía y Geba.

d) *Otras compañías de sisal*

185. Otras compañías de sisal registradas en 1961 eran las siguientes:

Nombre	Localidad (y distrito)
Rodrigues Pestana	Antonio Enes (Mozambique)
Vuervia Baptista e Cia.	Mocimboa da Praia (Cabo Delgado)
Sisal Aktiengesellschaft	Porto Amélia (Cabo Delgado)
Cia. Colonial de Nangororo, Lda.	Porto Amélia (Cabo Delgado)
Rufigya Pflanzungs Gesellschaft	Porto Amélia (Cabo Delgado)
António Moreira Longo	Porto Amélia (Cabo Delgado)
Empresa Agrícola de Monapo, Lda.	Moçambique (Mozambique)
Empresa Agrícola de Meserepane	Meserepane (Mozambique)

Nombre	Localidad (y distrito)
Namagoa Plantations	Quelimane (Zambézia)
Sisal Sul do Save	Inhambane (Inhambane)
Zemba Plantations	Chimoio (Manica e Sofala)

186. No se dispone de otros datos acerca de estas compañías.

Reglamentación y control oficial

187. No hay un régimen especial que regule la producción y exportación del sisal en Mozambique. Las exportaciones están sujetas al pago de un derecho de exportación uniforme del 1% *ad valorem* y un recargo *ad valorem* cuyo tipo ha variado. (Decreto 38.146, de 30 de diciembre de 1950.) Los productores de sisal también están sujetos a los impuestos habituales que gravan a las empresas agrícolas en gran escala, a saber, el *imposto sobre explorações* (que grava a las empresas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras) y el *imposto complementar* (impuesto adicional sobre los ingresos).

188. Los derechos de exportación han sido ajustados de tiempo en tiempo a causa de la inestabilidad de los precios del sisal. En 1950 (Decreto 38.146), el recargo se fijó a razón del 2,5% *ad valorem*. En 1954, la legislación promulgada en Angola para contrarrestar los efectos de la baja de los precios mundiales (Decreto 39.408, de 30 de octubre de 1952) fue extendida a Mozambique (Orden 15.042, de 2 de octubre de 1954). Con arreglo a esta legislación, el sisal fue declarado exento de todo tipo de gravamen a la exportación cuando el precio F.O.B. fuese inferior a 5 escudos por kilo; cuando el precio F.O.B. oscilara entre 5 y 6 escudos, sólo habría que pagar el derecho de exportación uniforme del 1% *ad valorem*; y cuando el precio oscilara entre 6 y 7 escudos, se impondría un recargo adicional, ajustado en orden ascendente a base de una escala móvil del 1% al 4% *ad valorem*.

189. Entre 1955 y 1960 quedaron suspendidos todos los gravámenes a la exportación a causa del colapso de los precios del sisal. En 1961 (Decreto 43.566, de 27 de marzo), se volvió a restablecer el derecho uniforme y el recargo.

CUADRO 16

SISAL: PRECIOS MEDIOS F.O.B. DE LAS EXPORTACIONES*

Año	Precio	Año	Precio
1955	4,52	1960	6,36
1956	4,58	1961	5,70
1957	3,94	1962	5,62
1958	4,49	1963	8,82
1959	5,18	1964	8,67
		1965 ^b	5,67

* Precios obtenidos comparando el volumen y el valor de las exportaciones.

^b Ocho primeros meses solamente.

Producción y exportaciones

190. Según se ha explicado anteriormente, la industria del sisal ha sufrido las consecuencias de la inestabilidad de los mercados mundiales originada por la competencia de otras fibras duras, y ha atravesado una larga crisis desde 1955 hasta 1961. Debido a esto y a la experiencia de la segunda guerra mundial, la producción apenas aumentó un poco entre 1938 y 1955, pasando de 23.000 a 27.000 toneladas. Después de 1955 el aumento fue algo más rápido, alcanzando el máximo en 1958. Este aumento obedeció principalmente al mejor rendimiento, que creció de 703 a 956 kg. por hectárea. De hecho, los precios mundiales se mantuvieron muy bajos durante este período y la superficie de cultivo no aumentó.

191. En 1958 el sisal ocupó el sexto lugar por su valor entre los principales cultivos de exportación del Territorio. Aunque en 1959 los precios empezaron a mejorar, la producción disminuyó hasta 1963 y 1964, cuando un fuerte aumento de los

precios, acompañado de una mayor producción, hizo pasar el valor de las exportaciones del sisal al cuarto lugar, y luego al tercero, entre los cultivos de exportación. Pero durante los ocho primeros meses de 1965 las exportaciones sólo fueron de 18.057 toneladas, por valor de 102.400.000 escudos, lo que representó una baja del 10% en volumen y una pérdida del 50% en valor en comparación con el período correspondiente de 1964.

192. Hasta ahora, excepto una pequeña cantidad de fibra reservada para la fabricación local de cuerda (79 toneladas en 1962), toda la producción de sisal de Mozambique ha sido exportada, siendo sus mercados principales los Estados Unidos de América, Francia, la República Federal de Alemania, Portugal y los Países Bajos. En 1962 los Estados Unidos compraron más de 10.000 toneladas de sisal, o sea el 33% de la exportación del Territorio. En cambio, Portugal sólo adquirió 1.300 toneladas. Según datos comunicados, entre 1950 y 1962 el sisal proporcionó el 82% de los ingresos en dólares de Mozambique. En 1959 las ventas del sisal representaron el 40% del valor de las exportaciones totales del Territorio a los Estados Unidos.

193. Portugal compra, por varias razones, pequeñas cantidades de sisal de Mozambique. Excepto durante el período 1957-1959, en que el 20% del sisal exportado fue a Portugal,

las exportaciones anuales a ese país no pasaron del 10%. Después de 1960 las importaciones portuguesas de sisal de Mozambique fueron incluso menores, en tanto que las procedentes de Angola aumentaron, debido principalmente a la diferencia de los costos de flete. Entre mayo de 1958 y octubre de 1959, las tarifas de flete presentaron una diferencia preferencial del 40% en favor del sisal de Mozambique, para contrarrestar la diferencia de costos de la fabricación portuguesa de cuerda. Al expirar en 1959 esta ventaja, las importaciones portuguesas de sisal de Mozambique disminuyeron en un 50%, pues el costo normal del flete desde Angola es 200 escudos menos por tonelada.

194. Otra razón es que, según se afirma, el sisal de Mozambique es de calidad superior a la requerida por la industria cordelera portuguesa, que prefiere comprar fibra más barata en Angola, Brasil y México. Entre 1952 y 1960, el 66,4% del sisal de Mozambique era de primera calidad y sólo el 26,4% de segunda calidad. Por otra parte, las importaciones portuguesas de fibra de primera calidad sólo representaron el 49,4% de sus importaciones totales de sisal.

195. En el cuadro siguiente se indican las exportaciones de sisal de Mozambique desde 1955 hasta 1964, por cantidad, valor y país de destino.

CUADRO 17

MOZAMBIQUE — SISAL: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, 1955-1964

Año	Exportaciones			Principales países de destino (% del volumen de exportaciones)						
	Miles de toneladas	Millones de escudos	% del valor total de las exportaciones	Estados Unidos	Francia	Portugal	Países Bajos	República Federal de Alemania	Sudáfrica	Bélgica-Luxemburgo
1955	26,9	121,4	7,16	30,82	15,20	7,80	10,91	6,76	3,97	8,55
1956	27,9	127,0	7,31	22,47	14,77	12,54	7,52	2,25	6,57	5,24
1957	32,4	127,6	6,29	22,95	23,87	15,89	9,89	4,19	6,64	4,05
1958	32,4	131,4	6,48	22,35	13,17	24,31	9,35	4,68	5,20	4,23
1959	30,6	158,4	8,32	24,92	15,87	24,76	7,44	5,73	2,25	2,84
1960	27,9	177,9	8,47	30,60	11,97	10,90	6,71	11,16	2,84	4,69
1961	28,4	162,1	6,36	35,90	13,55	8,93	9,26	10,16	4,82	2,06
1962	29,6	166,7	6,37	36,13	10,95	6,21	4,93	13,40	2,68	2,26
1963	29,7	261,6	9,03
1964	31,6	274,4	9,02	7,37	17,27	8,48	11,52	13,77	12,18	6,31

Fuentes: 1955-1963: Mozambique, *Comércio Externo y Anuário Estatístico*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

Acontecimientos recientes

196. Según hemos dicho, en 1965 se estableció una nueva compañía para la fabricación en gran escala de cuerda y otros productos del sisal. Esta empresa, conocida con el nombre de Companhia Industrial de Cordoarias de Moçambique, tiene un capital registrado de 10 millones de escudos, que puede ser aumentado hasta 20 millones. El accionista principal es la Companhia União Fabril de Portugal, que controlará el 45% de las acciones, a saber, 33% en nombre de la Companhia Têxtil do Púnguê, 10% en nombre de la Companhia de Seguros Império y 2% por conducto de su agencia de Lourenço Marques, Bryner y Worth. Otros accionistas de la nueva compañía son la Companhia Agrícola e Comercial João Ferreira dos Santos (11%), la Companhia do Boror (10,5%, más otro 0,5% en nombre de su administrador, Dr. Elisio da Costa Vilaca), la Empresa Agrícola do Monapo (11%), la Companhia Agrícola do Nangororo (11%) y José Rodrigues Pestana (11%).

197. Se informa que la compañía, que se instalará en Nacala, transformará el 80% del sisal en cuerda para atar sacos de cereales, y el resto se destinará a fabricar cuerdas para fines diversos, telas y cabos de amarre. En mayo de 1965 ya estaba vendida la producción de los tres primeros meses, a pesar de que la fábrica no empezaría a producir al máximo hasta comienzos de 1966.

198. Según un informe de la prensa, la producción de la fábrica se destinará principalmente a la exportación, por haber poca demanda de cuerda de sisal en Mozambique.

F. Té

Generalidades

199. El té es el más reciente de los seis principales cultivos de exportación de Mozambique y, con excepción del anacardo, el que se ha desarrollado con más rapidez en los últimos años. Este producto, que se cultiva principalmente en plantaciones integradas, lo sembraron por primera vez agricultores europeos en 1919, con carácter experimental, en la zona de Milange, en las tierras altas del distrito de Zambézia. La primera plantación y la primera planta de elaboración se establecieron en 1925 y 1929, respectivamente. Para 1939-1940 había bajo cultivo casi 3.000 hectáreas. Favorecida por la segunda guerra mundial, en que se interrumpieron los embarques tradicionales de Asia, la superficie cultivada aumentó a 9.706 hectáreas hacia 1949-1950, y volvió a aumentar hasta llegar a 15.227 hectáreas en 1962-1963.

200. En forma similar, la producción de té se duplicó en sucesivos períodos quinquenales entre 1924 y 1961, fecha esta en que llegó a las 10.000 toneladas, de las cuales se exportaron 9.900 por un valor de 235.700.000 escudos. Entre 1961 y 1963 sólo se plantaron 250 hectáreas más, en tanto que las exporta-

ciones descendieron a 8.400 toneladas. Según se informa, esto se debió a la caída de los precios, que empezaron a recuperarse en 1964, subiendo nuevamente las exportaciones en ese año a 9.000 toneladas, valuadas en 163.900.000 escudos. Se informa que la producción está aumentando constantemente debido al creciente rendimiento por hectárea.

201. Desde mediados del decenio de 1950, el té ha figurado alternativamente en el cuarto o quinto lugar entre los principales cultivos de exportación de Mozambique por su valor, según las fluctuaciones de los precios mundiales. En 1964 le correspondió el 5,4% del valor total de las exportaciones visibles. Considerando la producción mundial, Mozambique ocupa el duodécimo lugar entre los países productores, correspondiéndole sólo el 0,8% de la producción mundial. Entre los países productores africanos ocupa el tercer puesto, después de Kenia y Malawi.

202. El té que se produce es el de tipo indio de calidad corriente, similar al que se cultiva en otras partes del África oriental, y se lo clasifica principalmente como "filler" (base) para mezclarlo con otros téis más finos de la India y Ceilán, debido a que su sabor es poco característico. Se lo cultiva exclusivamente en las tierras altas del interior del distrito de Zambézia, y las principales regiones de cultivo son las de Guruè, Milange, Sacone y Tacuane. La zona productora más importante es la de Guruè, que comprende alrededor del 62% de las tierras dedicadas al cultivo de té, y que en 1962 produjo alrededor del 64% del total. En 1962-1963, de un total de 15.227 hectáreas de plantaciones, 9.475 estaban en el *cocelho* de Guruè, 2.658 en la *circunscrição* de Milange, 1.175 en la zona circundante de Socone (*circunscrição* de Ile), y 1.919 cerca de Tacuane (*circunscrição* de Lugela). Se estima que hay en el Territorio unas 150.000 hectáreas aptas para el cultivo del té.

Organización de la producción

203. Dada la gran masa de capital necesaria para establecer una plantación de té, que no empieza a rendir beneficios hasta después de los siete o diez años que tardan las plantas para llegar a la madurez, y que normalmente requiere el establecimiento de una planta de elaboración en las cercanías, el cultivo del té se efectúa principalmente en plantaciones de grandes empresas; en efecto, alrededor del 90% de la producción es de ese origen. En 1961-1962 había 36 plantaciones de té; 17 de ellas tenían entre 400 y 1.700 hectáreas; nueve, entre 100 y

399 hectáreas; y 10, menos de 100 hectáreas. Las explotaciones de menos de 100 hectáreas formaban parte de un plan de colonización auspiciado por el Gobierno (que se describe en los párrs. 214 a 216 *infra*); cabe señalar que el número de colonos agricultores aumentó de 10 a 28 en 1965.

204. Casi todo el té verde se convierte en té negro en las plantas de elaboración de propiedad de las empresas, con la única excepción de té producido por los pequeños colonos a los que corresponde sólo el 10% de la cosecha, que se elabora en una planta instalada por el Gobierno en el *concelho* de Guruè para ayudar a los pequeños agricultores. Se carece de datos recientes sobre la inversión total de capital en la industria del té, pero cabe señalar que, según se informó, en 1955 el capital invertido en las plantas de elaboración era de 242 millones de escudos, y el capital invertido en las plantaciones llegaba a los 1.000 millones de escudos. Desde entonces, la extensión dedicada al cultivo del té ha aumentado en un 26% y la producción en un 74%, de lo que puede deducirse que ha habido un considerable aumento en el capital invertido. Hay dificultades similares para determinar el número de trabajadores y sus salarios. Según una fuente*, en 1963 se estimó que en las plantaciones y plantas de elaboración de té estaban empleados 36.000 trabajadores, incluidos los no africanos, y que sus sueldos y salarios totalizaban entre 60 y 65 millones de escudos. Según datos oficiales, en 1961 había en las plantas de elaboración de té 206 empleados administrativos, técnicos y de oficina y 3.512 trabajadores manuales. Sus ingresos totales eran de 14.400.000 y 8.200.000 escudos respectivamente, sin contar los subsidios de alimentación, vestimenta y servicios médicos.

a) Empresas productoras de té

205. En 1961-1962 más del 80% de las plantaciones de té y alrededor del 89% del té verde producido estaba bajo el control de 17 compañías. Como el té verde se deteriora si se lo transporta a larga distancia, cada una de estas compañías tiene una planta de elaboración cerca de sus plantaciones. En el cuadro siguiente figuran las compañías que operaban en 1962, indicando respecto de cada una de ellas la localidad, la superficie cultivada y el volumen de té negro producido.

* Domingos José Soares Rebelo, "O chá na economia de Moçambique", Sociedade de Estudos da Provincia de Moçambique, *Boletim*, vol. 32, No. 137 (octubre-diciembre de 1963).

CUADRO 18

MOZAMBIQUE: EMPRESAS PRODUCTORAS DE TÉ, SU UBICACIÓN Y PRODUCCIÓN, 1962

Empresa	Ubicación	Superficie cultivada 1961-1962 (ha.)	Producción 1962 (ton.)
Chá Moçambique, Lda.	Guruè	1.660	1.551
Plantações M. Saraiva Junqueiro, S. A. R. L.	Guruè	1.222	847
Cia da Zambézia, S. A. R. L.	Guruè	992	676
Chá Guruè, Lda.	Guruè	907	713
Sociedade Chá Oriental, S. A. R. L.	Milange	810	1.037
Chá Montemuli, Lda.	Socone	652	401
Sociedade Agrícola do Madal, S. A. R. L.	Tacuane	638	622
Empresa Agrícola do Mococha, Lda.	Guruè	616	434
Chá Montebanco, Lda.	Guruè	606	382
Sociedade Agrícola do Napeia, Lda.	Socone	603	21
Chá Montualasse, Lda.	Socone	553	735
Duarte e Nunes, Lda.	Guruè	550	394
Empresa Colonial de Chá, Lda.	Guruè	540	331
Quinta Montessocone	Socone	531	
Metilile Agrícola, Lda.	Guruè	531	221
Empresa Agrícola de Chá, Lda.	Guruè	440	299
Liazi Agrícola, Lda.	Milange	400	396
Chá Tacuane, Lda.	Tacuane	...	195
Chá Luso, Lda.	Guruè	...	129

206. Comparando las superficies cultivadas con las cifras de producción de cada compañía, puede verse que el rendimiento por hectárea varía considerablemente. El rendimiento medio por hectárea aumentó de 422 kilos en 1956-1957 a 618 en 1961-1962, cifra que, no obstante, es sólo la mitad de lo que se obtiene en otras partes de África. Según una fuente, esto se debe principalmente a que las plantaciones son recientes^{*}.

207. Es poco lo que se sabe acerca de las distintas compañías. Algunas, como la Companhia de Zambézia y la Sociedade Agrícola do Madal, son grandes empresas agrícolas que producen principalmente copra y sisal. Otras, tales como Chá Moçambique, la mayor productora, parece que se dedican exclusivamente al té. A continuación se consignan algunos datos diversos sobre las grandes compañías:

i) *Companhia da Zambézia* (véanse también los párr. 147 a 151 *supra*)

208. Entre los tres principales productores de Mozambique, en 1965 la Compañía de Zambézia produjo 800 toneladas de té negro, con una superficie cultivada de 1.061 hectáreas. Emplea alrededor de 4.800 trabajadores africanos que, además del salario, reciben alimentos, ropa y alojamiento. Recientemente se construyó un moderno hospital dotado de varias enfermeras y un médico. La capacidad de la planta de elaboración es de 40 toneladas diarias.

209. Las utilidades obtenidas del té por la empresa sumaron 3.790 y 2.147 contos, respectivamente, en 1962 y 1963. En 1964 se informó que, aun cuando la producción había sido superior a la del año anterior, las utilidades eran menores debido, entre otras cosas, a un aumento del 37% en los gastos de mano de obra africana, un aumento correspondiente en el precio de las raciones y una disminución en el precio de exportación del té.

ii) *Chá Moçambique, Lda.*

210. Aunque esta compañía es la mayor productora del té de Mozambique (su producción en 1962 fue de 1.551 toneladas), se sabe muy poco de ella porque es una empresa privada y, como tal, no está obligada por ley a publicar sus memorias. Al parecer se está expandiendo, pues en 1962 recibió una concesión adicional de 4.800 hectáreas en la *circunscrição* de Angónia, distrito de Tete.

iii) *Sociedade Chá Oriental, Lda., y Sociedade Agrícola do Milange*

211. La Sociedade Chá Oriental, Lda. es el productor de té más antiguo de Mozambique y ocupa el segundo lugar como productor de té elaborado^{*}. Conocida originalmente como la Empresa Agrícola do Lugela, fue fundada en 1919 por la familia Gusmão, que introdujo el cultivo de té en el Territorio. Su actual directorio, compuesto en su totalidad por portugueses, está integrado por Antonio Correa de Sá (Presidente), João de Castro Pereira y Antonio José Lucas. La compañía está asociada con la Sociedade Agrícola do Milange y representada en el directorio de esta última, totalmente integrado por portugueses, formando parte del mismo D. Cacano de Lancaster (Presidente) y Abel Daniel da Costa Dies, además João de Castro Pereira, que representa a Chá Oriental.

212. La Sociedade Agrícola do Milange tiene un capital en acciones de 20 millones de escudos; en 1963 los resultados de sus operaciones arrojaron 385.761 escudos, contra 655.383 en 1960. La Sociedade Chá Oriental tiene un capital en acciones de 5 millones de escudos y bienes fijos por valor de 16.500.000 escudos. Sus utilidades brutas en 1960 fueron de 93.660 escudos, y en 1963 incurrió en una pérdida de 23.839 escudos. Parece que ambas compañías se vieron perjudicadas por las malas cosechas de 1963.

iv) *Plantações Manuel Saraiva Junqueiro*

213. Segunda productora de hoja de té de Mozambique, esta compañía tiene un capital de 10 millones de escudos y sigue aún bajo el control de su fundador original, M. S. Junqueiro. En 1964 sus utilidades sumaron 20.826 escudos.

^{*} Rebelo, *op. cit.*

^{*} Además de su propia producción, elabora la hoja de la Sociedade Agrícola do Milange.

b) *Pequeños cultivadores y colonias*

214. Desde el decenio de 1920 las autoridades portuguesas han considerado el té como una buena base para el asentamiento de pequeños agricultores europeos, porque es un cultivo que rinde muy buenos beneficios, y también porque crece mejor en las zonas saludables de las tierras altas.

215. El primer plan de colonización fue concebido en 1927, cuando expiraron las concesiones de *prazos* en la región de Gurúè. En virtud del plan propuesto, la zona sería dividida en pequeñas propiedades para entregarlas a colonos que las trabajarían con ayuda del Estado. El Estado construiría por su cuenta plantas de elaboración que eventualmente vendería a los colonos, organizados en cooperativas independientes de las grandes compañías.

216. En 1931 la *circunscrição* de Milange, con exclusión de Molumbo y la *circunscrição* de Gurúè, con exclusión de Lioma, fueron reservadas para el asentamiento de portugueses (Instrumento Legislativo 304, de 9 de mayo de 1931). Se estableció que la superficie máxima para una concesión sería de 1.000 hectáreas, y la confirmación de la concesión quedaba sujeta a que se explotase una tercera parte de la superficie dentro de los cinco años. A mediados de 1938 se puso fin a las concesiones en estas regiones, cuando el Departamento del Catastro informó que las concesiones de 1.000 hectáreas eran demasiado grandes para los pequeños agricultores. Se sugirió que la superficie ideal de una explotación pequeña podía ser de 60 a 80 hectáreas.

217. En 1939, merced a un estudio realizado en Gurúè se comprobó que cinco compañías ocupaban 8.000 hectáreas de tierras aptas para el cultivo del té. Se consideró entonces que el éxito de la colonización de Gurúè por pequeños agricultores independientes se veía amenazado por la competencia de los establecimientos mayores que poseían las mejores tierras, y por lo tanto se abandonó el plan de colonización. A fines de 1944 había en la zona 37 explotaciones agrícolas, todas ellas con excepción de 12, dedicadas al cultivo del té. En ese entonces se consideraba que el desarrollo de la industria del té por grandes agricultores era preferible a la colonización en pequeña escala.

218. En 1954, en virtud del Primer Plan de Desarrollo, volvió a despertarse el interés en la colonización basada en el cultivo del té, y se estableció un comité para investigar qué zonas eran adecuadas para la colonización (Mozambique, Ordenanza 14.763 de febrero de 1954).

219. Según una fuente no oficial, el Comité recomendó en 1957 las siguientes medidas:

1) Demarcación de las tierras adecuadas para planes de colonización en el distrito de Zambézia y en la región de Mossurize, de Manica e Sofala;

2) Establecimiento de cooperativas en esas zonas;

3) Suministro de servicios adecuados de financiación a todos los cultivadores y plantas de elaboración, donde fuera necesario;

4) Establecimiento de una estación experimental oficial para llevar a cabo experimentos sobre cultivo del té y asesorar a todos los cultivadores.

220. En virtud del Segundo Plan de Desarrollo, en 1959 se asignaron 75 millones de escudos para la demarcación de zonas adecuadas y para el desarrollo de un plan de colonización. Los gastos se elevaban a 14 millones de escudos a fines de 1962, y para 1963 se asignaron otros 5 millones.

221. Para 1961 se había establecido una colonia experimental en Vila Junqueiro, en Gurúè, que comprendía a nueve familias europeas y una africana (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 309 y 310). Ocho de los europeos eran soldados-colonos; se trajo a la familia africana principalmente para atraer a otros africanos, que en otras ocasiones se habían mostrado poco dispuestos a participar en el cultivo del té a causa de los siete años que deben transcurrir entre la plantación y la primera cosecha.

222. Cada familia europea recibió 50 hectáreas, de las cuales 20 se dedicarían al té y el resto a cultivos alimenticios, pastoreo y monte. El agricultor africano debía cultivar cuatro hectáreas de té con la asistencia técnica y financiera de la *Brigada*

de Chá. Bajo la orientación de la *Brigada*, estos pequeños productores han formado una cooperativa que utiliza fondos comunes para la vivienda, equipo agrícola y otras necesidades. Según se informó, en 1961 la colonia ya estaba produciendo 980 toneladas de té verde.

223. En el decenio de 1960 el Gobierno instaló una planta de elaboración con una capacidad inicial de 1.000 toneladas, que podía aumentarse a 2.000 toneladas, financiada en parte por un préstamo de dos millones de escudos del Banco Nacional Ultramarino. En 1965 se elaboró té por primera vez en esa planta, que la cooperativa de productores ha decidido comprar con un préstamo a largo plazo.

224. Según los cálculos originales, se esperaba que los agricultores europeos llegarían a ganar cada uno 70.000 escudos anuales.

225. Al parecer, informes posteriores de la *Brigada de Chá* han hecho desistir al Gobierno de seguir promoviendo la colonización a base del cultivo del té. Según una fuente, el establecimiento de una plantación de té de tamaño mínimo — 15 hectáreas — cuesta unos 600.000 escudos, inversión de la que no puede esperarse ningún rendimiento por lo menos durante el período de siete años que tardan en madurar las plantas. Se sugirió que el dinero del Estado podría emplearse con más provecho proporcionando ayuda financiera a empresas mayores. Hubo un momento en que se pensó establecer colonias similares en Milange y Tacuane, pero no parece haberse hecho nada a este respecto.

226. Según una fuente*, en 1961 había en Gurúé 5.928 hectáreas ocupadas por colonos, de las cuales se cultivaban 800. Otras 1.670 hectáreas serían abiertas en breve plazo a la explotación. En 1965 se informó que el número de pequeños agricultores en Gurúé había llegado a veintiocho y aumentaba rápidamente.

Reglamentación y control oficial

227. Aparte de las medidas de ayuda para el desarrollo de la producción de té ya descritas, la industria no está sujeta a ninguna reglamentación o control especial del Estado. Como se exporta principalmente a países situados fuera de la zona del escudo, el té es una importante fuente de divisas y, en virtud de las reglamentaciones de control de cambios en vigor, aporta una valiosa contribución a la balanza de pagos de Portugal.

228. Las exportaciones de té están sujetas a un derecho uniforme del 1% *ad valorem*, más un recargo *ad valorem* del 3%. En el caso de las exportaciones a Portugal el té es objeto de una reducción especial del 25% del impuesto total.

Exportaciones y países de destino

229. Con la excepción de una pequeña cantidad reservada para el consumo interno, que sólo fue de 330 toneladas en 1961, todo el té producido en Mozambique se exporta. Los mercados tradicionales para el té de Mozambique son el Reino Unido,

Sudáfrica y Portugal, que absorbieron respectivamente el 60,52%, 8,25% y 5,53% de las exportaciones de Mozambique entre 1925 y 1962. Aunque a los Estados Unidos y a los Países Bajos les correspondió respectivamente el 12,05% y el 6,26% de las ventas durante este período, no se los considera mercados completamente seguros. Los Estados Unidos no han sido un gran comprador desde 1950. Los Países Bajos han comprado té de Mozambique sólo desde 1950.

230. Por ser el Reino Unido el mayor comprador de té de Mozambique, los productores están sujetos al sistema de comercialización británico que, según una fuente^{aa}, tiene ciertas desventajas para los productores. En virtud de este sistema, el té se subasta en un mercado central en el que se realiza el 80% de todas las transacciones del mundo. El día que el té llega de Mozambique se informa al productor el precio que recibirá si se lo vende ese día. Sin embargo, dado que pasan dos o tres meses entre el momento de la cotización original y el momento en que se vende el té, los productores no tienen modo de conocer o controlar el precio real de venta. Entretanto, el productor debe cargar con todos los gastos de producción y embarque, y si el precio baja no puede aplazar su venta para otra fecha. Para mejorar esta situación, el Banco Nacional Ultramarino, en colaboración con el Banco Anglo-Portugués, instituyó un sistema especial por el cual el productor puede expedir el té a nombre del Banco, el que le entrega por anticipado un porcentaje del precio de venta previsto. La venta la efectúa el Banco Anglo-Portugués, que esperará el momento oportuno para vender.

231. Pese a esta ayuda ofrecida por el Banco Nacional Ultramarino, Mozambique se encuentra aún en situación desfavorable en el mercado del Reino Unido. Dado que su té generalmente se clasifica como calidad "filler", sólo se cotiza en alrededor de la mitad o una tercera parte del precio del té de mejor calidad, y suele recibir el precio más bajo de todos los té africanos.

232. Además, los productores de Mozambique están obligados a pagar un derecho de importación, generalmente superior a 1,40 dólares por kilo, que se aplica al té importado de países ajenos al *Commonwealth*.

233. En los primeros años del decenio de 1960 los productores de Mozambique intentaron encontrar un mercado en las subastas de Nairobi. En 1961 se vendieron de este modo 222 cajones de té, que aumentaron en 1962 a 1.326 cajones. Pero en 1963 las ventas bajaron a 420 cajones, y ese año se informó que Mozambique no participaría en lo sucesivo en esas subastas.

234. No se conocen los precios actuales de exportación del té de Mozambique. En los últimos tiempos, el precio más alto se registró en 1959 (23 escudos el kilo), pero después declinó en 1960 y 1961. Se ha informado que desde 1962 los precios están mejorando nuevamente. En 1962 el precio medio era de 20 escudos el kilo.

^{aa} Banco Nacional Ultramarino, *Boletim Trimestral*, No. 43, 30 de septiembre de 1960.

CUADRO 19

MOZAMBIQUE — TÉ: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, 1955-1964

Año	Exportaciones			Principales países de destino (% del volumen de exportaciones)					
	Miles de toneladas	Millones de escudos	% del valor total de las exportaciones	Reino Unido	Estados Unidos	Países Bajos	Portugal	República Federal de Alemania	Australia
1955	5,5	155,1	9,15	66,14	11,82	8,63	2,04	1,57	—
1956	6,3	120,5	6,94	83,27	2,82	7,79	2,71	0,94	0,03
1957	5,9	118,2	5,83	83,28	3,24	6,76	2,28	1,24	0,12
1958	6,9	145,6	7,18	81,55	2,36	9,53	2,48	0,54	0,74
1959	8,0	154,5	8,11	72,07	5,81	10,57	1,94	1,73	2,14
1960	8,1	176,4	8,40	79,33	5,36	3,19	1,98	3,67	1,86
1961	9,9	235,7	9,25	72,67	8,95	1,69	1,60	3,36	1,28
1962	9,0	179,6	6,87	80,52	5,26	2,94	2,07	1,96	0,44
1963	8,4	155,4	5,37
1964	9,0	163,9	5,39	53,48	8,62	9,44	2,16	1,53	6,42

Fuentes: 1955-1962: Mozambique, *Comércio Externo*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

CUADRO 20

MOZAMBIQUE: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, 1955-1964

(Toneladas métricas)

Año	Algodón	Anacardo ^a	Azúcar	Copra	Sisal	Té	Aceites vegetales	Frutas ^b	Tabaco ^c
1955	32.687	50.056	85.820	34.823	26.896	5.540	13.346	12.235	379
1956	22.677	39.003	98.176	41.377	27.940	6.276	13.828	16.283	96
1957	31.578	69.358	122.321	45.507	32.374	5.869	15.793	24.906	410
1958	35.974	97.200	132.387	44.368	32.450	6.904	11.976	17.341	540
1959	35.051	63.033	114.108	37.639	30.596	7.987	8.422	16.342	454
1960	44.406	57.203	111.249	40.753	27.950	8.066	6.385	23.012	514
1961	42.631	85.641	113.843	60.070	28.427	9.905	9.588	17.170	1.147
1962	36.301	82.378	129.931	52.794	29.643	8.989	7.919	23.215	1.210
1963	31.564	121.895	124.896	46.433	29.680	8.438	14.963	25.550	1.017
1964	32.445	127.796	83.347	43.812	31.581	9.017	17.893	27.217	696

Fuentes: 1955-1962: Mozambique, *Comércio externo*. 1963: Mozambique, *Anuário Estatístico*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

^a Incluye anacardo con y sin cáscara.

^b Incluye bananas y cítricos.

^c Incluye tabaco manufacturado y sin manufacturar.

CUADRO 21

MOZAMBIQUE: PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN EL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES, 1955-1964

Año	Total de las exportaciones (miles de escudos)	Algodón %	Anacardo ^a %	Azúcar %	Copra %	Sisal %	Té %	Accites vegetales %	Fruta ^b %	Tabaco ^c %
1955 ...	1.695.766	25,41	8,46	12,60	8,26	7,16	9,15	5,27	0,34	0,37
1956 ...	1.735.674	17,79	8,74	14,32	9,58	7,31	6,94	6,28	0,42	0,13
1957 ...	2.029.294	23,51	12,29	15,57	8,51	6,29	5,83	6,03	0,53	0,37
1958 ...	2.028.566	27,07	13,71	16,62	9,33	6,48	7,18	4,43	0,43	0,63
1959 ...	1.903.988	28,39	10,49	15,21	11,08	8,32	8,11	3,97	0,42	0,73
1960 ...	2.099.250	32,47	11,12	13,25	9,26	8,47	8,40	2,43	0,52	0,65
1961 ...	2.548.126	27,31	13,33	12,75	10,47	6,36	9,25	2,83	0,77	1,10
1962 ...	2.615.832	23,43	10,49	13,19	7,82	6,37	6,87	2,24	1,27	1,24
1963 ...	2.896.355	18,06	16,07	11,31	7,04	9,03	5,37	3,96	1,23	1,21
1964 ...	3.042.973	18,56	19,99	8,07	6,84	9,02	5,39	4,92	1,15	0,95

Fuentes: 1955-1962: Mozambique, *Comércio externo*. 1963: Mozambique, *Anuário Estatístico*. 1964: Mozambique, *Boletim Mensal*, diciembre de 1964.

^a Incluye anacardo con y sin cáscara.

^b Incluye bananas y cítricos.

^c Incluye tabaco manufacturado y sin manufacturar.

APENDICE IV

Ferrocarriles de propiedad extranjera en Angola y Mozambique

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-2
I. ANGOLA: EL FERROCARRIL DE BENGUELA	
A. Las redes ferroviarias de Angola	3-15
B. Historia del ferrocarril de Benguela	16-19
C. Condiciones de la concesión	20-25
D. Organización y finanzas de la Compañía..	20-25
E. Explotación del ferrocarril y su papel en la economía	36-61
II. MOZAMBIQUE: EL FERROCARRIL TRASZAMBEZIANO	
A. Las redes ferroviarias de Mozambique ...	62-71

	Párrafos
B. Historia del ferrocarril traszambeziiano ...	72-79
C. Condiciones de la concesión	80-87
D. Organización y finanzas de la Compañía ..	88-92
E. Operaciones y función económica del ferrocarril	93-97

CUADROS

	Página
1. Ferrocarril de Benguela: transporte de mercancías y de servicio, 1954-1963	493
2. Ferrocarril de Benguela: transporte interior y de tránsito por productos principales, 1961-1963	494

Anexos

I. ANGOLA: Servicios ferroviarios	501
II. MOZAMBIQUE: Servicios ferroviarios	501

INTRODUCCIÓN

1. Los ferrocarriles representan una rama importante de la actividad económica en toda la región de África meridional y vienen desempeñando un papel preponderante en el desarrollo de las industrias y en el asentamiento de europeos. Mozambique especialmente, debido a su situación geográfica respecto de las ricas regiones mineras e industriales del interior, cuenta en grado considerable con sus ferrocarriles como fuente de ingresos de divisas por concepto de invisibles, las cuales hasta fecha reciente compensaban con creces el importante déficit de su balanza del comercio exterior. En Angola, donde sólo hay un ferrocarril para el enlace con los ferrocarriles de países vecinos, este factor es de importancia relativamente menor y se puede decir que los ferrocarriles han desempeñado un papel comparativamente mayor en el acceso al país de las industrias y colonización europeas.

2. En el presente documento se describen las redes ferroviarias de ambos territorios y su función económica. Sin embargo, aquí se trata primordialmente de dos ferrocarriles de propiedad extranjera y se dan detalles de su historia, propiedad y actividades. De los dos, el ferrocarril de Benguela es con mucho el más importante, tanto por su significación económica como por los beneficios que produce, así como por los ingresos que el Gobierno obtiene de él. Los dos ferrocarriles son muestra de otra faceta más del papel desempeñado por los intereses económicos extranjeros en los territorios bajo administración portuguesa.

I. ANGOLA: EL FERROCARRIL DE BENGUELA

A. Las redes ferroviarias de Angola

3. En comparación con los ferrocarriles de Mozambique (que se describen en la sección II, *infra*), las instalaciones ferroviarias de Angola se encuentran menos desarrolladas y no representan un papel tan importante en la economía del Territorio. Si bien por su extensión Angola es medio millón de kilómetros cuadrados mayor que Mozambique, la longitud de sus líneas ferroviarias es casi la misma, lo que da lugar a una densidad ferroviaria de 2,4 kilómetros de vía por cada 1.000 kilómetros cuadrados de territorio, mientras que en Mozambique la cifra correspondiente es de 4,2 kilómetros.

4. Las instalaciones ferroviarias de Angola están constituidas por tres líneas principales no enlazadas entre sí, que penetran en el interior siguiendo trayectos paralelos desde los puertos de Luanda, Lobito y Moçamedes. Una de esas líneas, el ferrocarril de Benguela, que es la única línea de propiedad no portuguesa, atraviesa todo el Territorio y enlaza con líneas internacionales, mientras que los otros dos ferrocarriles, que son propiedad del Estado, llegan sólo a mitad de camino aproximadamente entre la costa y la frontera oriental del Territorio con Zambia. Existe además una corta línea ferroviaria de propiedad privada de 129 kilómetros de longitud entre Amboim y Gabela.

5. Las instalaciones ferroviarias de Angola, aunque limitadas, siempre han funcionado por debajo de su capacidad. A pesar de los importantes aumentos que experimentó el tráfico de estas tres líneas después de la segunda guerra mundial, el tráfico de 1959 en Angola, expresado en toneladas/kilómetro por kilómetro de vía, fue inferior a la décima parte de la cifra correspondiente de Mozambique. En años recientes, la ampliación de la red de carreteras que dan servicio a puntos del interior, ha quitado todavía más tráfico nacional a los dos ferrocarriles interiores, y en 1963 los ingresos calculados del organismo autónomo de carreteras superaron en casi un 10% los de la Direcção de Portos e Caminhos de Ferro, que administra los ferrocarriles de propiedad del Estado.

6. La parte septentrional de Angola cuenta con el ferrocarril de Luanda, que es el más antiguo del Territorio. En principio fue construido, principalmente, con capitales británicos por la Real Companhia Ferroviaria Transafricana (Companhia Real dos Caminhos de Ferro Através de África) mediante una concesión por 99 años que le fue otorgada por el Gobierno portugués en 1885. El primer tramo de este ferrocarril, conocido

entonces por línea Luanda-Ambaca, se inauguró en 1889, pero la construcción del tramo restante fue lenta y sólo en 1901 llegó a Ambaca, estación terminal provisional a 276 kilómetros de la costa. El trayecto final de 140 kilómetros hasta Malanje fue terminado por el Gobierno en 1909^a. Debido a dificultades crónicas entre la Companhia y el Gobierno, este último ejerció en 1914 el derecho de rescatar la totalidad de la línea y en 1918 tomó posesión de ella (Decreto 4.600, de 13 de junio de 1918)^b.

7. El ferrocarril de Luanda cuenta en la actualidad con una longitud total de 615 kilómetros. Además de la línea principal de 516 kilómetros entre Luanda y Malanje, existen dos ramales, uno de 55 kilómetros a Dondo y otro de 33 kilómetros hasta Galungo Alto. Está en construcción un nuevo ramal denominado línea del distrito del Congo. Por prestar servicio a los distritos de Luanda, Cuanza Norte y Malanje, el ferrocarril de Luanda ha aumentado en importancia, en proporción a la creciente colonización y desarrollo efectuados por europeos en esta región. Conforme se dio cuenta anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, cuadro 2), la población europea de estos tres distritos se ha duplicado con creces desde 1950, y en 1960 constituía más de un tercio de la población europea total del Territorio. Entre los principales productos de esta región figuran el aceite de palma, café, algodón, azúcar, algo de sisal, manganeso, asfalto y mica, los cuales se exportan por el puerto de Luanda. Si bien la línea de Luanda lleva muchos años funcionando a la mitad de su capacidad, potencialmente es de gran importancia para el desarrollo del Territorio, por dar servicio a una zona que ya contiene algunas de las actividades industriales más importantes del Territorio y continúa atrayendo nuevas industrias.

8. Entre las empresas servidas por la línea de Luanda se contaban en 1964 la plantación y fábrica de azúcar Bom Jesus, Petrangol, Cotonang, y la fábrica de cemento más importante del Territorio, SECIL, que en 1963 tuvo una producción de 290.000 toneladas. Como los principales yacimientos de manganeso se encuentran entre Galungo Alto y Punto Andongo, la línea de Luanda era la principal arteria de salida del mineral de manganeso durante la década que comenzó en 1950 (*ibid.*, anexo I, párrs. 67 a 69). En la actualidad, el café constituye una gran parte del tráfico de salida del ferrocarril de Luanda, especialmente por el ramal de Galungo Alto, que sirve a la zona de Dembos. La mayor parte del tráfico de entrada consiste en artículos de consumo y artículos duraderos, incluyendo maquinaria y equipo para las empresas y plantaciones europeas. Se espera que la línea del distrito Congo, que se está prolongando hasta el centro de la región productora de café en la meseta de Uije, incremente notablemente el valor del ferrocarril de Luanda al abrir un acceso a la parte septentrional del Territorio para un desarrollo más intensivo (*ibid.*, anexo II, párr. 70). Se espera que, una vez terminada, la línea del distrito Congo transporte anualmente una carga de 600.000 toneladas, dando servicios a puntos tan al norte como S. Salvador, Quicoxe, Vale do M'Bridge y Quimba, donde la Companhia União Fabril tiene sus principales plantaciones de fibra.

9. Desde mediados de la década 1950-1960, el ferrocarril de Luanda viene transportando una media aproximada de una cuarta parte del tráfico total de pasajeros del Territorio. Reflejando el desarrollo de la región servida, desde 1960 el tráfico de mercancías por esta línea ha aumentado en más del 50%. En 1964, al ferrocarril de Luanda le correspondió un 25% aproximado en peso del tráfico total de mercancías del Territorio.

10. El tercio meridional del Territorio está servido por el ferrocarril de Moçamedes, propiedad del Estado, que tiene un

^a Algunos escritores portugueses atribuyen la lentitud del ritmo de construcción a las condiciones liberales del contrato de concesión que daba a la compañía una renta anual garantizada del 6% sobre el capital invertido, calculado sobre la base de 999 reis por kilómetro.

^b Durante cierto tiempo la línea fue puesta bajo la dirección de una compañía portuguesa, Ambaca, que fue finalmente disuelta en 1938.

^c Se considera generalmente que la zona servida por el ferrocarril se extiende a unos 150 kilómetros a cada lado de la línea.

trayecto casi paralelo a la frontera con África Sudoccidental. La concesión inicial se hizo en 1886 a la Compañía Moçamedes. Como en aquella época Portugal estaba dedicado a colonizar Angola meridional y a intensificar su influencia en esa región⁴, el ferrocarril se construyó con la finalidad de facilitar los movimientos de tropas a la meseta Huíla y el asentamiento de súbditos portugueses en esa región (*ibid.*, párr. 93). Por eso, en las condiciones de la concesión se estipulaba que la administración de la compañía, la mayoría de los empleados y la proporción mayor de capital fueran portugueses. Esta línea es ahora propiedad del Estado.

11. El primer tramo de 249 kilómetros hasta Sá da Bandeira en la meseta de Huíla, que se comenzó a construir en 1905, no fue terminado hasta 1923. Aun cuando en diversas épocas se formularon planes para prolongar el ferrocarril hasta la frontera meridional y dar servicio a África Sudoccidental y también hasta la frontera oriental para facilitar una segunda salida hacia el oeste a lo que ahora es Zambia, Sá da Bandeira siguió siendo durante veinte años más el punto terminal del ferrocarril meridional.

12. El ferrocarril de Moçamedes fue construido antes que la zona del interior estuviera lo bastante desarrollada para proporcionar suficiente tráfico rentable, por lo cual durante la mayor parte de su existencia este ferrocarril funcionó con un importante déficit. Entre los años 1942 y 1950, los déficit anuales fluctuaron entre el 25% y casi el 70%. Aun cuando después de 1950 el tráfico de mercancías y de pasajeros aumentó, y los ingresos del ferrocarril se elevaron desde los 5.400.000 escudos en 1952 a 31.200.000 escudos en 1962, la situación financiera del ferrocarril no mejoró sino ligeramente, ya que durante este período la relación entre los gastos de explotación y los ingresos disminuyó de 1,6 a 1,3.

13. En forma análoga al ferrocarril de Luanda, el ferrocarril de Moçamedes ha venido creciendo en importancia en los años recientes debido a la expansión de la colonización portuguesa, especialmente en el Valle del Cunene, al desarrollo de las haciendas para la cría de ganado y sobre todo a la creación de accesos a las minas de hierro de Cassinga, para las cuales se está construyendo un nuevo enlace ferroviario (véase más adelante y el documento A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párrs. 210 y 211). Se esperaba que este nuevo tramo permitiese exportar anualmente un millón de toneladas de mineral, para 1965, y tres millones de toneladas, para 1967⁵, pasando por el puerto de Moçamedes, donde el Gobierno está construyendo un nuevo muelle para minerales.

14. El ferrocarril de Benguela que arranca del puerto de Lobito, aproximadamente a mitad de camino en la costa entre Luanda y Moçamedes, sirve a la zona central de Angola y se prolonga hasta la frontera oriental donde enlaza con la red ferroviaria de Katanga. Aunque, como se verá más adelante, fue construido en principio para transportar mineral desde las minas de Katanga a la costa, el ferrocarril de Benguela pasó a ser y ha seguido después siendo un factor importante en la colonización de las mesetas de Benguela y de Bié, y en la salida de los productos agropecuarios de estas zonas y del interior. También es el único ferrocarril cuya explotación viene dando un beneficio y contribuye a los ingresos del Gobierno Territorial.

15. La historia, actividades y papel desempeñado en la economía por el ferrocarril de Benguela, que se describen más adelante, muestran una faceta más del papel desempeñado en el Territorio por intereses económicos extranjeros.

B. Historia del ferrocarril de Benguela

16. El ferrocarril de Benguela va desde Lobito hasta Benguela, a unos 35 kilómetros al sur y luego cruza Angola hasta

Vila Teixeira de Sousa (Dilolo), donde enlaza con el ferrocarril Congo-Bas Katanga (conocido generalmente por Ferrocarril BCK). La longitud del ferrocarril desde Lobito hasta la frontera oriental es de 1.348 kilómetros más 182 kilómetros en apartaderos, vías muertas y estaciones de clasificación.

17. La idea de construir una línea ferroviaria que cruzara Angola desde Lobito se remonta al año 1895, cuando se constituyó una comisión especial para estudiar la zona comprendida entre Lobito y el río Cubango, hasta Caconda, que entonces era un importante centro de colonización (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párr. 147). Ulteriormente fue construida una línea ferroviaria de 23 kilómetros desde Lobito a Catumbela, a mitad de camino en dirección a la ciudad de Benguela, por la Companhia Portuguesa do Caminho de Ferro Africano. En agosto de 1899 el Gobierno portugués autorizó la construcción de un ferrocarril en dirección a lo que ahora es la República Democrática del Congo, y al año siguiente estableció un Consejo de Administración del ferrocarril de Benguela (Junta Administrativa do Caminho de Ferro de Benguela) (los estatutos se aprobaron el 23 de junio de 1900) integrado por funcionarios oficiales y representantes de intereses bancarios, comerciales e industriales de Portugal, así como intereses comerciales y agrícolas de Angola. Se proyectaba que la construcción del ferrocarril fuera financiada con derechos aduaneros suplementarios, ciertos impuestos nuevos, los ingresos procedentes de la explotación del ferrocarril durante su construcción y los ingresos derivados de los productos de las zonas interiores servidas por el ferrocarril. Sin embargo, en 1902, el Gobierno decidió otorgar la concesión para construir el ferrocarril a Robert Williams, que representaba a la Tanganyika Concessions Company (establecida en Londres en 1899), la cual, por haber obtenido amplias concesiones para la extracción de cobre en Katanga y Rhodesia, era uno de los principales promotores de ferrocarriles para servir a estas zonas. El 26 de mayo de 1903 se estableció la Benguela Railroad Company y la concesión del ferrocarril fue transferida a esta Compañía. Para la construcción del ferrocarril se contrató una compañía británica, la S. Pauling and Company.

18. Según los primeros proyectos, el ferrocarril de Benguela había de atravesar Angola y el trayecto principal del mismo había de ir paralelo a la frontera con el Congo, donde enlazaría con la red ferroviaria congoleña. Se formalizó un acuerdo entre la compañía ferroviaria de Benguela y las congoleñas (compañías BCK y Katanga Railway) para la construcción de un ramal que enlazara las minas de Katanga con el ferrocarril de Benguela al llegar a la frontera. Los ingresos producidos por el tráfico de estas líneas habían de ser divididos entre las compañías en proporción a la longitud de sus líneas respectivas.

19. Debido a las dificultades del terreno, con empinadas pendientes de 2,5% en el trayecto desde la costa a la meseta de Benguela, los trabajos de construcción del ferrocarril marcharon a ritmo lento. El primer tramo de 197 kilómetros desde Lobito a Cubal se inauguró en 1908, el segundo tramo hasta Cuma en 1910 y el tercer tramo hasta Chinguar, con una distancia total de unos 517 kilómetros desde Lobito, se inauguró en 1913. Durante la primera guerra mundial se interrumpieron las obras del ferrocarril a causa de la dificultad para obtener materiales. Como entretanto la compañía BCK había construido una línea interior desde Katanga a Port Francqui, después de la guerra el anterior acuerdo con las compañías ferroviarias del Congo hubo de ser revisado⁶. En 1928, a raíz de la revisión de la frontera entre Angola y el Congo fue necesario prolongar el ferrocarril de Benguela añadiéndole 104 kilómetros más de lo previsto inicialmente, y la Benguela Railway Company tuvo que reunir más capital⁷. Des-

⁴ Lionel Wiener, *Les chemins de fer coloniaux*, Bruselas, 1930, págs. 154 y 155.

⁵ Debido al convenio secreto a que se alude más arriba (véase la nota d) hubo un tiempo en que se creyó que Alemania podría participar en la financiación del ferrocarril (Hailey, *An African Survey*, Oxford, edición de 1945, pág. 1595).

⁶ Tras la Conferencia de Berlín de 1885 se firmó un acuerdo secreto Anglo-Germano en el que se designó como esfera de influencia alemana el sur de Angola, Benguela y Lobito. (José D'Almeida, *An historical outline of the Benguela Railway*, Londres, 1954, págs. 24 y 32.)

⁷ *Actualidade Económica de Angola*, 2 de septiembre de 1965.

pués de la primera guerra mundial, la Tanganyika Concessions, que entonces era poseedora de cinco sextos del total de las acciones de la Benguela Railway Company, recibió un empréstito británico de 1.250.000 libras esterlinas y se terminó la construcción del ferrocarril hasta Dilolo, situado en la frontera de Angola, en el año 1929^b. Finalmente, en 1931, se terminó el enlace de 520 kilómetros de longitud desde Tenke, en el Congo, hasta Dilolo.

C. Condiciones de la concesión

20. Por un acuerdo de fecha 28 de noviembre de 1902, se adjudicó la concesión del ferrocarril de Benguela a Robert Williams. Dicho acuerdo, junto con las subsiguientes modificaciones autorizadas por el Gobierno portugués, constituyen el fundamento jurídico para las actividades de la Benguela Railway Company.

21. Con arreglo a las cláusulas del contrato, la concesión se hace por un período de 99 años, que finaliza el año 2001, y como en el caso del ferrocarril Trasmambeziano que se describe más adelante, a la expiración de ese plazo, el ferrocarril revertirá al Estado, sin pago alguno, con toda su infraestructura y material rodante, edificios y accesorios. Sin embargo, en el contrato también se estipula que, una vez transcurridos 25 años a partir de la fecha en que el ferrocarril haya alcanzado la frontera, o sea de 1954 en adelante, el Gobierno puede rescatar el ferrocarril y el equipo, previa notificación de seis meses a tal efecto. Cuando así lo hiciera, el Gobierno habrá de abonar una anualidad a la Compañía durante el período que reste de la concesión por un monto igual a los ingresos netos medios del ferrocarril durante los cinco años precedentes, monto que, con arreglo al contrato, no había de ser inferior a 700 reis por kilómetro (artículo 56). En caso de una suspensión total o parcial del servicio, el Gobierno puede hacerse cargo de la explotación del ferrocarril y, a los tres meses, si la Compañía sigue sin poder continuar su explotación, incurrirá *ipso facto* en la penalidad de rescisión.

22. El contrato otorgaba a Robert Williams y a su Compañía (entonces todavía por constituir) el derecho a construir y explotar un ferrocarril desde la Bahía Lobito hasta la frontera oriental, que se aproximaría en su punto terminal al paralelo 12 de latitud sur. Se otorgaba a la Compañía, durante los primeros diez años de la concesión, el derecho a efectuar prospecciones de minerales dentro de una zona de 120 kilómetros de tierras estatales a ambos lados de la línea férrea; su derecho a explotar las correspondientes minas quedaba sujeto a la legislación minera de 1898. Asimismo se le concedía el derecho a utilizar madera en las mismas zonas por el tiempo de la duración de la concesión en tanto fuera necesario para la construcción y explotación del ferrocarril; se le otorgaba también el derecho a construir un muelle en la Bahía Lobito como prolongación y parte integrante del ferrocarril para uso propio y guardando relación con sus operaciones ferroviarias; y el derecho (posteriormente modificado) de construir hoteles, restaurantes y tiendas a lo largo de la línea.

23. Durante el período de la concesión, se eximía a la Compañía de "toda clase de impuestos tanto generales como municipales" sobre la explotación del ferrocarril. Quedaba asimismo exenta del pago de derechos por los minerales transportados por el ferrocarril, incluido el mineral extraído a lo largo de la línea férrea o procedente de países limítrofes; dichos minerales quedaban, sin embargo, sujetos a los derechos de exportación especificados en la legislación minera. Se la eximía asimismo de los derechos de importación aplicables a determinados bienes necesarios, inclusive carbón u otro combustible para el ferrocarril.

24. El Gobierno se comprometía a no construir ni otorgar concesiones para la construcción de ningún otro ferrocarril

paralelo dentro de 50 kilómetros a ambos lados de la línea férrea; en cambio, se reservó el derecho de hacer concesiones para la construcción de líneas férreas u otros medios de comunicaciones que se cruzasen con el ferrocarril o empalmasen con él.

25. En el contrato de concesión se estipulaba que las tarifas del ferrocarril habían de ser aprobadas por el Gobierno y no excederían de un tope máximo prefijado. En la lista de tarifas se dividían las mercancías en diversas clases, aplicándose las tarifas máximas a los productos agrícolas de precio alto como el azúcar y el café, tarifas que excedían en un 20% a las aplicables a cereales (comprendidos el trigo, el maíz y la harina), algodón en rama, aceite de palma, hierro en lingotes, cobre, plomo y otros metales brutos.

D. Organización y finanzas de la Compañía

26. Con arreglo al contrato primitivo, se exigía de la Benguela Railway Company que tuviera un capital no inferior a 2 millones de libras esterlinas. En 1926, por Decreto 11.732, de 29 de mayo, dicha cifra se aumentó a 3 millones, equivalente a 13.500.000 escudos oro. Con el fin de que la Compañía dispusiera de mayor capital de explotación, se le autorizó más tarde a emitir, con sujeción a la legislación portuguesa, debentures de un valor nominal equivalente al triple del capital en acciones ya realizado (artículo 15 de los Estatutos en su texto enmendado por el Decreto 11.732, de 29 de mayo de 1926; la Ley No. 1.011, de 18 de julio de 1920; y la Ley de 23 de junio de 1923). La Compañía había de constituirse y registrarse con arreglo a la legislación portuguesa y en su Consejo de Administración habían de figurar tres miembros nombrados libremente por el Gobierno portugués, aunque remunerados por la Compañía. Además, en el Consejo de Administración participaba un Delegado del Gobierno, también pagado por la Compañía.

27. En 1963, el Consejo de Administración estaba integrado por los siguientes señores: Dr. Alexandre Pinto Basto, Presidente; Dr. Ruy Ennes Ulrich, Vicepresidente; Coronel Arthur Mendes de Magalhães, Consejero por el Gobierno; Vicealmirante José Augusto Guerreiro de Brito, Consejero por el Gobierno; Dr. Manuel António Fernandes, Director Gerente; Don António de Almeida Correa de Sá, Vicedirector Gerente; Dr. Luís Supico Pinto; A. V. A. de Spirelet; Muy Hon. Lord Clitheroc, P. C.; M. T. W. Easby, F. C. A.; S. G. Watts.

28. La Benguela Railway Company está estrechamente asociada a la Tanganyika Concessions Ltd., que posee el 90% de su capital en acciones y, desde 1933, todo su capital en debentures. En 1964, la Tanganyika Concessions Ltd. poseía un capital total autorizado de 10 millones de libras esterlinas. Además de su participación predominante en la Benguela Railway Company, también poseía un 14% de participación (179.760 acciones valoradas en 15.176.880 libras esterlinas) en la Union Minière du Haut Katanga; el 50% del capital (40.000 libras) de la Tanganyika Holdings; todo el capital de la Tanganyika Properties (Rhodesia) Ltd., y el 60% del capital (2.250.000 libras) de la Commonwealth Timber Industries. En noviembre de 1964, la Tanganyika Concessions Ltd. trasladó sus oficinas centrales de Rhodesia del Sur a las Bahamas. Entre los accionistas de la Tanganyika Concessions Ltd. figura la Rhodesia Anglo-American, que en 1952-1953 adquirió, según se informa, una participación del 7%, así como un grupo norteamericano, con participación de los Rockefeller, de quienes se ha afirmado que desde 1950 controlan unas 600.000 acciones¹. El Comité Spécial du Katanga fue primitivamente un accionista que obtuvo 30.000 acciones. Harry F. Oppenheimer, Presidente de la Anglo-American Corporation, pertenece al Consejo de Administración.

¹ T. Gregory, *Ernest Oppenheimer*, Ciudad de El Cabo, 1962, pág. 457; W. A. Hunton, *Decision in Africa*, Nueva York, 1957, pág. 147.

^b Hailey, *op. cit.*

29. El 31 de diciembre de 1963, el activo total de la Benguela Railway Company ascendía a 3.049 millones de escudos, incluidos 2.500 millones de escudos en activo fijo. El capital social en acciones de la Compañía era de 660 millones de escudos distribuidos en 3 millones de acciones de 220 escudos cada una. Las reservas totales representaban 1.436 millones de escudos, de los cuales 81.700.000 constituían las reservas legales, 548 millones pertenecían a reservas generales y 21.600.000

correspondían a la reserva para regularización de dividendos¹.

30. Los resultados de la Compañía para los años 1960-1964 — que constituyen los años más recientes para los que se dispone de datos — fueron los siguientes:

¹ Tanganyika Concessions Ltd., *Report and Accounts*, 31 julio 1964, págs. 26 y 27; Benguela Railway Company, balance fusionado.

	1960	1961	1962	1963	1964
(Millones de escudos)					
Entradas brutas	596,5	599,9	596,5	551,0	563,8
Gastos de explotación	304,9	337,3	344,9	336,7	354,7
Ingresos netos del ferrocarril	287,3	260,8	250,7	214,3	207,0
Ingresos netos para distribución:	246,1	220,5	207,6	171,6	170,8
Dividendos	82,5	82,5	66,0	66,0	66,0
Participación del Gobierno portugués	26,7	22,9	23,5	17,1	17,1
Reserva legal	9,4	8,3	8,4	6,7	6,7
Obligaciones: amortización e intereses	108,6	79,4	30,1	30,6	30,2
Participación del Consejo de Administración y Personal ^a	18,9	16,5	16,9	20,1	20,1

^a El Consejo de Administración y la Junta de Auditores perciben conjuntamente el 5% de los ingresos netos, previa deducción de las cantidades destinadas a amortización y pago de intereses de las obligaciones y parte de la participación del Gobierno portugués. La cantidad correspondiente al personal por concepto de participación en beneficios solía ser una cantidad similar, pero en 1963 se elevó al 10% de los ingresos netos, previa deducción de las sumas señaladas.

31. Con arreglo a la concesión original, el Gobierno obtuvo el 10% del total de las acciones totalmente cubiertas. Además de los dividendos correspondientes a sus acciones, el Gobierno debía recibir el 5% de las entradas netas.

32. En 1926 — fecha en que, por Decreto 11.732, de 29 de mayo, se elevó el capital de la Compañía de 2 millones a 3 millones de libras esterlinas — se aumentó también la participación financiera del Gobierno. Además de las acciones que ya poseía, las cláusulas enmendadas daban derecho

al Gobierno al 15% de las nuevas acciones emitidas y al 7,5% de todos los dividendos que se abonasen por concepto de capital en acciones por encima del 5%. Una enmienda posterior volvió a aumentar la participación del Gobierno adjudicándole otro 5% de todos los dividendos por encima del 2,5%. El Gobierno posee actualmente 300.000 acciones (el 10% de los 3 millones de acciones emitidas) a un valor nominal de 220 escudos cada una. A continuación se expresan las cantidades percibidas por el Gobierno tanto por concepto de dividendos como de participación en las entradas netas:

PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LOS INGRESOS DE LA
BENGUELA RAILWAY COMPANY, 1960-1964
(Millones de escudos)

	1960	1961	1962	1963	1964
A. Dividendos por acciones poseídas (300.000 acciones)	8,2	8,2	6,6	6,6	6,6
B. Participación en las entradas netas					
1. 5% de entradas netas	9,9	8,7	8,9	7,0	7,0
2. 7,5% de dividendos abonados por capital en acciones por encima del 5%	9,6	8,0	8,3	5,6	5,5
3. 5% de dividendos por encima del 2,5%	7,2	6,2	6,3	4,5	4,5
TOTAL PARCIAL	26,7	22,9	23,5	17,1	17,0
TOTAL GENERAL	34,9	31,1	30,1	23,7	23,6

33. Durante el decenio 1955-1964, aparte de los dividendos, el Gobierno percibió más de 200 millones de escudos (unos 7 millones de dólares de los Estados Unidos). En opinión de la Compañía, sin embargo, como todas las instalaciones revertirán a propiedad del Gobierno al expirar la concesión, las inversiones que se realizan constituyen una contribución al "patrimonio de la nación".

34. Al igual que en el caso de la Angola Diamond Company, la Benguela Railway Company también ha ayudado al

Gobierno portugués facilitando fondos a bajo interés para el desarrollo (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párrs. 84 a 166). En 1963 (Decreto 45.062, de 5 de junio de 1963), la Compañía contrajo un préstamo de 60 millones de escudos (2 millones de dólares de los EE. UU.) para el Gobierno portugués destinado a la ejecución de la parte angolana del Segundo Plan Nacional de Desarrollo. El tipo de interés es del 1% y el Gobierno proyecta reembolsar el préstamo a base de su participación en los beneficios del ferrocarril, complementándolos, en caso necesario, con los ingresos ordinarios

del Territorio. No se sabe a ciencia cierta la proporción en que la Benguela Railway Company obtiene divisas para el Territorio, pero las memorias de los balances arrojan cada año una pérdida de divisas que supuso más de 470.000 escudos en 1960; más de 763.000 escudos en 1961; 1.059.608 escudos en 1962 y 680.736 escudos en 1963.

35. Aunque con arreglo a las cláusulas de la concesión, la Benguela Railway Company está exenta de toda clase de impuestos "generales o municipales" (véase el párr. 23 *supra*), a la Compañía se le impuso una contribución de 200.000 escudos en 1965 por concepto de impuesto especial progresivo sobre los ingresos recabado por el Gobierno de Angola (véase cap. V, párr. 106 *supra*). La Compañía ha apelado contra esa imposición. No se dispone de datos detallados sobre otros tipos de impuestos abonados por el ferrocarril al Gobierno.

E. Explotación del ferrocarril y su papel en la

36. Hasta finales de 1965, el ferrocarril de Benguela seguía teniendo sólo una vía. Disponía de más de un centenar de locomotoras de vapor, cuatro locomotoras diesel y más de 1.500 vagones de cuatro ejes. La mayoría de las locomotoras quemaban leña y, para abastecerse de ella, la Compañía había creado bosques de eucaliptos a lo largo de los dos lados de la línea ferroviaria poblados por más de 93 millones de árboles. El carbón se utiliza principalmente en tramos cortos cuando la pendiente es empinada. Aunque en tonelaje el transporte de servicio ferroviario, que no es productor de ingresos, representa anualmente casi la mitad del total, en

tonelada/kilómetro, empero, el transporte de servicio representa menos del 10%.

37. El ferrocarril de Benguela, creado con el propósito de transportar el mineral de cobre desde las minas de Katanga, brinda la ruta más corta a Europa desde los puertos de cabeza de línea en la parte meridional de África. Es 3.000 millas más corta que la ruta marítima desde Beira y 2.353 millas más corta que la ruta de Ciudad de El Cabo. No obstante, por varias razones — entre ellas, la fuerte competencia de otras líneas (véanse los párrs. 51 a 54 *infra*) — el ferrocarril de Benguela nunca ha sido utilizado a toda su capacidad para el tránsito, y, durante muchos años, el tráfico interno en Angola ha sido la principal fuente de ingresos del ferrocarril.

38. Según los cálculos financieros originales, el ferrocarril debería transportar 40.000 toneladas de cobre por año desde Katanga para poder arrojar un beneficio sobre el capital invertido. Cuando quedó terminado definitivamente en 1929 el ferrocarril de Benguela, se preveía que por él se transportaría anualmente un promedio de más de un cuarto de millón de toneladas (260.000 toneladas), cifra que comprendía 100.000 toneladas de explotaciones de Katanga, 70.000 de importaciones a Katanga, 60.000 toneladas de exportaciones de Angola y 30.000 toneladas de importaciones a Angola. En 1938, tras casi diez años de explotación, el tráfico total productor de ingresos ascendía 324.000 toneladas, pero el transporte en tránsito representaba menos de una cuarta parte del tráfico total.

CUADRO 1

FERROCARRIL DE BENGUELA: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y DE SERVICIO, 1954-1963

A. Por tonelaje

	Interno		En tránsito		De servicio ^a	Total (inclusive transporte de servicio)
	Toneladas	% del total	Toneladas	% del total	Toneladas	
1954	534.308	25,28	593.202	28,07	(986.081)	2.113.593
1955	579.613	25,53	630.394	27,77	(1.060.018)	2.270.025
1956	703.170	27,56	720.942	28,25	(1.127.623)	2.551.735
1957	737.939	26,44	652.763	23,39	(1.400.584)	2.791.286
1958	797.627	28,30	569.021	20,19	(1.451.962)	2.818.610
1959	852.007	31,12	622.662	22,74	(1.263.146)	2.727.815
1960	1.067.593	29,56	754.962	20,90	(1.789.237)	3.611.792
1961	1.063.836	30,33	763.695	21,77	(1.679.594)	3.507.125
1962	883.852	27,35	754.937	23,36	(1.592.547)	3.231.336
1963	999.330	35,75	670.538	23,99	(1.125.211)	2.795.079

B. Por tonelada/kilómetro

	Interno		En tránsito		De servicio ^a	Total (inclusive transporte de servicio)
	Tonelada/km.	% del total	Tonelada/km.	% del total	Tonelada/km.	
1954	476.774.893	32,57	1.017.689.733	63,65	(127.443.167)	1.645.794.626
1954	184.900.420	17,11	799.635.953	74,00	(96.007.689)	1.080.544.062
1955	217.607.538	18,68	849.771.323	72,97	(97.238.342)	1.164.617.203
1956	254.309.675	19,22	971.830.660	73,43	(97.240.634)	1.323.380.969
1957	248.532.483	19,97	879.924.577	70,72	(115.853.667)	1.244.310.727
1958	327.704.649	26,71	767.041.138	62,51	(132.258.892)	1.227.004.679
1959	364.838.921	28,07	839.348.693	64,58	(89.467.328)	1.299.654.942
1960	469.806.501	29,38	1.017.689.733	63,65	(111.429.321)	1.598.925.555
1961	488.890.581	29,70	1.029.460.878	62,55	(127.443.167)	1.645.794.626
1962	416.356.994	26,86	1.017.654.566	65,64	(116.291.702)	1.550.303.262
1963	476.774.893	32,57	903.885.186	61,74	(83.280.223)	1.463.940.302

Fuente: Eduardo Gomes de Albuquerque e Castro, *Angola, Portos e Transportes*, Luanda, 1964 (sin paginación).

^a No productor de ingresos.

39. El transporte total de mercancías de pago efectuado por el ferrocarril casi se duplicó entre los años 1938 y 1948, pasando de 324.000 toneladas a 692.000; y volvió a duplicarse en 1958. En este período de 20 años, el transporte en tránsito se octuplicó, pasando de 76.000 toneladas a 569.000 y, expresado como porcentaje del total, del 23% a más del 40%. El aumento del transporte en tránsito y del transporte interno de mercancías remunerado durante el período 1954-1963 puede apreciarse en el cuadro 1.

40. Los factores que influyen en el transporte interno y en tránsito del ferrocarril de Benguela se examinan en las secciones que figuran a continuación.

Transporte interior

41. Dentro de Angola el ferrocarril de Benguela cruza los distritos de Benguela, Bié, Huambo y Moxico, y ha desempeñado un papel importante en su colonización y desarrollo. A él debe atribuirse también la mayor actividad del puerto de Lobito. Al inaugurarse el ferrocarril había pocas colonias en la región interior de Lobito. En 1960 eran más de 45.000 los co-

lonos europeos establecidos en los distritos de Benguela y Huambo, con centros europeos importantes en Ganda, Nova Lisboa y Silva Porto, que están en la línea del ferrocarril.

42. Como se describe en el estudio sobre las industrias agropecuarias y de transformación de Angola (véase el apéndice II), la meseta Benguela-Bié es actualmente el centro principal del cultivo del sisal, cuyas exportaciones representan más del 8% del valor total de las exportaciones del Territorio. En esta región se produce también aproximadamente el 95% del maíz, que por su tonelaje es la principal exportación del Territorio, y la mayor parte de la mandioca. La existencia del ferrocarril ha estimulado la producción de maíz y mandioca del África a ambos lados de la línea. Desde 1920 a los primeros años del decenio de 1940 el maíz representó del 30% al 50% del transporte total de mercaderías por el ferrocarril de Benguela*. Esta proporción ha disminuido considerablemente en los últimos años, como puede verse en el cuadro siguiente.

* Portugal, Instituto Nacional de Estadística, *I Congresso dos Economistas Portugueses, V. Secção-Utilização do Solo*, Lisboa 1945, pág. 98.

CUADRO 2

FERROCARRIL DE BENGUELA: TRANSPORTE INTERIOR Y DE TRÁNSITO POR PRODUCTOS PRINCIPALES, 1961-1963

	1961 (toneladas métricas)	1962 (toneladas métricas)	1963 (toneladas métricas)
Minerales	1.002.491	843.278	794.374
Maíz	156.390	77.919	97.921
Madera (<i>madeiras em bruto</i>)	18.690	40.216	75.116
Aceite combustible	43.137	46.292	47.430
Cemento	25.216	30.450	41.545
Fibra (principalmente sisal)	40.456	43.248	40.754
Petróleo	41.040	40.492	40.568
Piedras y ripio	17.564	26.197	30.095
Vino y cerveza	16.578	18.243	24.162
Sal	16.048	14.872	18.463
Azúcar	22.574	20.469	17.742
Abonos y productos químicos	19.293	11.945	13.053

Fuente: Eduardo Gomes de Albuquerque e Castro, *Angola, Portos e Transportes*, Luanda,

43. Entre las importaciones de la región que queda al norte de la línea cabe mencionar una amplia gama de bienes de consumo duraderos y no duraderos para las comunidades situadas a lo largo del ferrocarril hasta Dondo, en el distrito de Lunda, en que la Angola Diamond Company se dedica a la minería (véase A/6000/Rev.I, cap. V, anexo I, párr. 105). Aunque no existen cifras detalladas sobre la naturaleza del transporte de importación realizado por el ferrocarril, se pueden conseguir algunos datos de la clasificación de las importaciones del puerto de Lobito. Como cabrá esperar, en 1954, por ejemplo, las importaciones consistieron principalmente en productos del petróleo (21%), carbón (15%, que se retiene en su mayor parte en el puerto), cemento (13%), bebidas alcohólicas (13,7%), y materiales de construcción y maquinaria (7,14% y 3%, respectivamente)¹.

44. Si bien el maíz y otros productos agrícolas siguen constituyendo parte principal del transporte interior de exportación del ferrocarril de Benguela, el mineral ha adquirido importancia desde 1957, con la apertura de las minas de hierro de Cuíma, de la Companhia Mineira do Lobito, descritas en un estudio anterior (*ibid.*, párrs. 200 a 211).

45. Como las minas de Cuíma se encuentran situadas sólo a 41 millas de la estación Robert Williams del ferrocarril de Benguela, durante varios años el mineral de hierro se transportó hasta allí en camiones. En 1961 se firmaron acuerdos formales con la Companhia Mineira de Lobito (22 de marzo de 1961)^m y el Gobierno de Portugal (Decreto 43.601, 14 de abril) para la construcción de un nuevo empalme de ferrocarril desde las minas Cuíma hasta el ferrocarril de Benguela.

46. En virtud de las disposiciones de ese contrato con el Gobierno, la Compañía del ferrocarril de Benguela adquirió el derecho de construir y explotar un empalme entre Robert Williams y Cuíma y de extender la línea a nuevos yacimientos a medida que se inaugurasen. La línea debía construirse en el plazo de quince meses y considerarse parte integrante de la concesión primitiva de 1902 y sujeta a rescate por el Gobierno en las mismas condiciones.

47. El nuevo ramal formó parte de un plan global de desarrollo de las minas de hierro de Cassinga y Cuíma formalizado por un acuerdo concertado entre el Gobierno de Portugal y las dos compañías mineras, Companhia Mineira do Lobito y la Sociedade Mineira do Lombigoⁿ. La finalidad princi-

¹ Hance and Van Donegan, "Port of Lobito and the Benguela Railway", *Geographical Review*, vol. 46, 1956, pág. 477.

^m *Diário do Governo*, Serie II, 22 de marzo de 1961.

ⁿ *Ibid.*, 26 de noviembre de 1958.

pal de este acuerdo consistió en asegurar la construcción por parte de las dos compañías interesadas de ramales ferroviarios desde sus minas hasta el ferrocarril de Moçâmedes, y suministrar el material rodante para el transporte de 1.500.000 toneladas de mineral por año (o sea unas 5.000 toneladas diarias). El Gobierno debía reembolsar la inversión de las compañías a razón de 60 escudos por tonelada de mineral transportado, hasta que se amortizase completamente la cifra total. Como la línea Moçâmedes pertenece al Estado, el Gobierno decidió otorgar prioridad al mineral de hierro en dicho ferrocarril a una tarifa convenida. Se autorizó al ferrocarril de Benguela a transportar hasta 500.000 toneladas de mineral por año con una garantía de un mínimo de 250.000 toneladas^a a condición de que el transporte de Cuíma en la línea Moçâmedes no bajase de 700.000 toneladas por año.

48. El 9 de agosto de 1962 se abrió al transporte el empalme Benguela-Cuíma, que costó 30.400.000 escudos. El mineral transportado desde Cuíma en el Ferrocarril de Benguela desde 1957 es el siguiente: 88.357 toneladas en 1957; 197.110 en 1958; 245.728 en 1959; 439.887 en 1960; 380.627 en 1961; 231.847 en 1962; 288.931 en 1963 y 310.198 toneladas en 1964^b.

49. Se había previsto al principio que el mineral de las minas de Cuíma representaría las dos terceras partes del transporte de mineral garantizado a los ferrocarriles de Moçâmedes y Benguela, pero hacia fines de 1965 se preveía que el desarrollo de las minas de Cassinga conduciría en definitiva al abandono de las minas de Cuíma^c, donde las reservas totales de mineral de hierro representan probablemente menos de la décima parte de los casi 300 millones de toneladas que, según los cálculos, existen en Cassinga (A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párr. 59).

Transporte de tránsito

a) Factores que afectan al transporte de tránsito

50. Construido inicialmente con el propósito de asegurar una ruta directa para sacar el mineral de los yacimientos de Katanga, mediante su enlace con el ferrocarril BCK, el ferrocarril de Benguela se convirtió ulteriormente en parte del único sistema transcontinental africano que asegura una salida hacia el oeste para las minas de la zona del cobre. Por diversas razones, sin embargo, no se ha utilizado nunca el ferrocarril de Benguela a plena capacidad para el transporte de tránsito, ya sea desde Katanga o de la zona del cobre, no obstante las ventajas que ofrece como la ruta más corta a los puertos europeos.

51. Antes que se terminase el ferrocarril de Benguela, se tenía la intención de concertar tarifas únicas con el ramal del ferrocarril BCK a la frontera angolana y en 1927 se firmó a este efecto un acuerdo entre los Gobiernos de Bélgica y Portugal^d. Sin embargo, debido en parte a la política del Gobierno del Congo Belga de desviar el transporte a sus propios ferrocarriles y en parte a la oposición de los ferrocarriles de Rhodesia, las tarifas únicas sólo se adoptaron por dos breves períodos entre 1931 y 1939.

52. Según el informe de la Conferencia de Transportes del África central y meridional celebrada en Johannesburgo, en 1950^e, en las dos oportunidades en que se introdujeron tarifas únicas, en los ferrocarriles BCK y Benguela en 1931 y 1936, los ferrocarriles de Rhodesia, medio ordinario de transporte de la zona del cobre, pidieron y lograron el retiro de las tarifas únicas del ferrocarril de Benguela. En 1938 los ferrocarriles de Rhodesia concertaron un acuerdo con los cuatro productores principales con el fin de proteger su participación en el trans-

porte desde la zona del cobre^f. En virtud de este acuerdo, que permaneció en vigor hasta 1956, los productores convinieron en consignar todas las exportaciones de cobre y todas las importaciones a los ferrocarriles de Rhodesia, a cambio de una rebaja de 12 chelines, 6 peniques por tonelada de cobre exportado vía Beira, y se comprometieron a emplear carbón de las Wankie Collieries de Rhodesia del Sur a una tarifa rebajada especial. Como consecuencia de esto, si se exceptúan unos pocos suministros de emergencia de carbón importado vía Lobito, el ferrocarril de Benguela no realizó el transporte de la zona del cobre durante el período del acuerdo^g.

53. Después de expirado el acuerdo mencionado, las tarifas en los ferrocarriles de Benguela y BCK se redujeron a una aproximada paridad, tomando en cuenta el mayor costo del transporte vía Matadi. Aunque estas tarifas eran todavía más elevadas que las de los ferrocarriles de Rhodesia, entre los tres ferrocarriles interesados se llegó a un acuerdo en virtud del cual se permitía que se transportase por el ferrocarril de Benguela un máximo del 20% del cobre exportable de la región del cobre^h. Este acuerdo, que estuvo en vigor durante cuatro años a partir del 1° de enero de 1957, eliminó también las limitaciones a las importaciones hacia la región del cobre vía Lobito, y las restricciones impuestas a otras exportaciones por esta ruta. Las tarifas de entrada desde Lobito para todos los productos, excepto el carbón, debían ser las mismas que las de Beira, y las tarifas de salida sobre todos los productos, con excepción del cobre, debían ser las normales tarifas múltiples compuestas de tres tarifas distintas. Las tarifas de salida sobre el cobre debían ser tarifas únicas, y no inferiores a las de la región del cobre hacia Beira o Lourenço Marques.

54. En 1960 el Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia abrogó en parte el acuerdo tripartito, y si bien permitió a las compañías mineras exportar hasta 36.000 toneladas cortas por el ferrocarril de Benguela, las tarifas en los ferrocarriles de Rhodesia se rebajaron en 4 libras esterlinas por tonelada (de 18 a 14 libras esterlinas), con lo cual los embarques desde la región del cobre a través de Lobito disminuyeron de 81.000 toneladas en 1959 a 63.000 en 1960 y a 20.000 toneladas en 1961, después de lo cual cesaron prácticamente los embarques de salida, si bien el tráfico entrante en la región del cobre continuó a razón de unas 12.000 toneladas anuales.

b) Modalidades del transporte de tránsito

55. Como se desprende de los párrafos precedentes, al transporte de tránsito procedente del Congo y de las minas de Rhodesia en el ferrocarril de Benguela no se le ha permitido desarrollarse libremente, sino que ha sido limitado principalmente por la competencia entre las distintas líneas. Antes de 1960 el ferrocarril de Benguela parece haber transportado todo el mineral de manganeso y más o menos el 20% de la producción anual de cobre (300.000 toneladas) desde las minas de Katanga con tarifas para el cobre a Lobito y Matadi a una paridad artificial. (En este período los ferrocarriles de Rhodesia transportaron el 30% del cobre de Katanga cobrando tarifas bajas.) Entre 1960 y 1963, debido a dificultades de transporte en la República del Congo, el ferrocarril de Benguela transportó el 65% del cobre de Katanga a más o menos las mismas tarifas que las del ferrocarril de Rhodesia, que transportaba el 35% restante. La participación del ferrocarril de Benguela en el transporte de la región del cobre fue mucho menor. No transportó nada durante el período 1938-1957. Desde 1957 a

^a *Boletim Geral*, agosto de 1962, pág. 253.

^b Las cifras correspondientes al período 1957-1960 y a 1964 han sido tomadas del *Boletim Geral*; las cifras de 1962 y 1963 proceden del informe de la Compañía de Benguela para 1963.

^c *Boletim Geral do Ultramar*, diciembre de 1965, pág. 196.

^d Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, vol. LXXI, 1928, pág. 439.

^e CCTA. *Central and Southern Africa Transport Conference, Final act and related documents*, Johannesburgo, 1950, pág. 130.

^f Rhokana Corporation, Roan Antelope Copper Mines, Ltd., Mufulira Copper Mines Ltd., y N'Changa Copper Mines, Ltd.

^g Si bien la expansión del transporte en el período de la posguerra y la consiguiente congestión de algunos de los puertos africanos meridionales indujo a la Conferencia de Transportes de Johannesburgo de 1950 a recomendar que se volviera a dirigir parte del transporte por el ferrocarril de Benguela, tales recomendaciones no fueron aceptadas.

^h Acuerdo tripartito entre la Companhia do Caminho de Ferro de Benguela, la Companhia du Chemin de Fer Bas-Congo au Katanga, y los ferrocarriles de Rhodesia relativo al tránsito de mercaderías entre Lobito y los ferrocarriles de Rhodesia, 1956.

1960 se lo autorizó a que transportara hasta el 20%, pero en realidad nunca excedió el 14% del total, y desde 1961 hasta fines de 1965 transportó sólo una parte muy pequeña. Un factor importante que contribuyó a que el transporte de la región del cobre se apartara del ferrocarril de Benguela fue la fijación de tarifas más altas por la conferencia de transporte para el flete marítimo desde Lobito a los puertos europeos en comparación con las tarifas desde Lourenço Marques, pese a que el embarque por esta última ruta tardaba de 30 a 35 días más^w.

56. El transporte de tránsito realizado durante el período 1955-1959 fluctuó alrededor de un promedio de unas 650.000 toneladas anuales. La mayor parte de éste consistió en transporte de mineral procedente de Katanga. En 1959, por ejemplo, de las 622.662 toneladas transportadas, 449.249 procedían de Katanga, y estaban compuestas por 59.511 toneladas de cobre, 34.426 toneladas de zinc, 12.507 toneladas de cobalto, 331.402 toneladas de manganeso y otros minerales y 6.117 toneladas de algodón. Las importaciones consistieron en 33.916 toneladas de combustible, 13.562 toneladas de hierro y acero y 9.475 toneladas de equipo pesado^x.

57. Los acontecimientos ocurridos después de 1960 constituyen un nuevo ejemplo de la forma en que los factores externos influyen sobre el papel internacional del ferrocarril de Benguela. Desde 1960 y 1962, cuando como consecuencia de los disturbios en la República Democrática del Congo se desvió una parte más considerable del transporte de Katanga al ferrocarril de Benguela, los ingresos netos de la compañía alcanzaron un nivel jamás conocido anteriormente (véase el párrafo 30, *supra*). En 1963, a raíz de la reapertura de las líneas congoleñas, el comercio de tránsito de la línea de Benguela disminuyó en 85.000 toneladas, y con esto el ingreso de la Compañía se redujo en más del 15%.

c) Acontecimientos recientes

58. Como resultado del empeoramiento de las relaciones de Zambia con Rhodesia del Sur que siguió a la declaración unilateral de independencia de esta última, las minas de la región del cobre han hecho mayor uso del ferrocarril de Benguela. A principios de 1966 se informó que los embarques de cobre se hacían a razón de 5.000 toneladas mensuales y que se esperaba aumentasen a 10.000 mensuales a mediados de año. Los ingresos de la Compañía correspondientes al primer trimestre de 1966 registraron un 40% de aumento con respecto a 1965.

59. Como se informó ya en otra parte (véase cap. V, párr. 123 *supra*), a principios de 1966 el ferrocarril de Benguela anunció su decisión de duplicar la actual capacidad de 1.500.000 toneladas de la línea (en una dirección), construyendo una nueva entre Lobito y Cubal a un costo de más o menos 5 millones de libras esterlinas, incluyendo material rodante adicional. Según algunos informes, la Compañía consideró que su inversión se reintegraría en el período restante de su contrato únicamente si se garantizaba al ferrocarril de Benguela el 20% del transporte del cobre de Zambia, que representa más o menos de 120.000 a 140.000 toneladas anuales.

60. Se prevé que el nuevo empalme se termine dentro de dos años. Mientras tanto, debido a que Zambia desea desviar sus exportaciones de cobre del ferrocarril de Rhodesia, se está revisando la capacidad ferrocarrilera total de la región del cobre a los diversos puertos de exportación. En junio, el Gobierno de la República Democrática del Congo anunció su propósito de traspasar todo el transporte de Katanga hacia sus propios ferrocarriles con el fin de dejar libre al Ferrocarril de Benguela para los embarques de cobre de Zambia. Se esperaba que con el material rodante provisional disponible de los ferrocarriles congoleños, el ferrocarril de Benguela pudiera empezar a transportar 20.000 toneladas de cobre mensuales, que llegarían luego a 38.000, con lo cual se habría asegurado la salida de más de medio millón de toneladas de cobre de Zambia.

^w En lo relativo al cobre, estas tarifas a los puertos europeos eran un tercio más altas desde Lobito en comparación con las tarifas desde Lourenço Marques.

^x Bélgica, Ministère des affaires africaines. La situation économique du Congo belge et Ruanda Urundi, 1959.

61. En julio, el Gobierno del Congo anunció sin embargo que el comercio de Katanga seguiría utilizando el ferrocarril de Benguela, debido a que los ferrocarriles del Congo no tenían suficiente material rodante para hacer frente al sobrecargo de trabajo. Es evidente, con todo, que al ritmo actual de operaciones, el ferrocarril de Benguela cuenta con capacidad de sobra para el transporte de tránsito. La medida en que se aproveche esta capacidad en lo porvenir dependerá del resultado de las negociaciones celebradas entre los gobiernos y las compañías mineras para encontrar otras rutas posibles para el cobre de Zambia, así como del nivel de las tarifas ferrocarrileras que se acuerden y los ajustes que se hagan en las tarifas de fletes de la conferencia desde Lobito a los puertos de Europa occidental.

II. MOZAMBIQUE: EL FERROCARRIL TRASZAMBEZIANO

A. Las redes ferroviarias de Mozambique

62. Como se dice en otra parte (véase el apéndice I *supra*), Mozambique obtiene considerable ventaja económica, por su ubicación geográfica, respecto de las regiones sin litoral del interior. Con un litoral de 2.795 kilómetros y uno de los mejores puertos naturales del África meridional, presenta lógicamente la única salida al mar de Rhodesia del Sur y de Malawi y el más corto de los caminos posibles de Zambia, el Transvaal y Swazilandia. A esta ventaja natural se debe que el capital invertido en infraestructura económica se haya dedicado en gran parte a instalaciones ferroviarias y portuarias. Mozambique obtiene hoy una cuarta parte de sus ganancias en divisas del comercio de tránsito de sus vecinos, factor vital para un territorio cuya balanza de comercio visible arroja déficit crónico^y. Además, la dirección autónoma de puertos, ferrocarriles y transporte, cuyo presupuesto ascendió en el año de 1965 a 1.009 millones de escudos, emplea mucho personal y es gran contribuyente a los ingresos públicos tanto ordinarios como extraordinarios. Fuera de esto, la actividad económica de las ciudades portuarias de Lourenço Marques y Beira se debe, en buena parte, al comercio de tránsito.

63. Si bien se ha destinado mucho capital al desarrollo de las instalaciones ferroviarias y portuarias por las cuales se realiza el transporte de tránsito, se ha hecho menos, en cambio, por desarrollar las comunicaciones internas, en parte porque en los primeros tiempos el desarrollo se efectuó, principalmente, cerca del litoral y porque como el territorio es en gran parte largo y estrecho la navegación fluvial y de cabotaje satisfizo en buena parte las necesidades de transporte. Aunque hay siete redes o líneas ferroviarias separadas, no existe aún enlace entre ellas.

64. Las dos redes más importantes parten de los puertos de Lourenço Marques y Beira y se unen con los ferrocarriles de Sudáfrica, Rhodesia del Sur y Malawi. La red de Lourenço Marques, por la que se efectúa la mayor parte del comercio de tránsito, consiste en dos grandes líneas internacionales: la primera va directamente de Lourenço Marques hasta Ressano García en la frontera del Transvaal, a una distancia de 91 kilómetros solamente, donde se une con el ferrocarril sudafricano. Esta línea la construyó el Gobierno de Portugal a fines del decenio de 1890, a instancias del Transvaal y, conforme al Convenio de Mozambique, se garantiza que el 40% del tráfico de ida y vuelta de mercancías de ultramar se efectuará por determinada zona, que comprende el centro minero e industrial del Transvaal^z. Otra gran línea internacional se ramifica al nor-

^y La balanza comercial de Mozambique arrojó en 1965 un déficit de 1.242 millones de escudos. Este déficit quedó en gran parte compensado por el excedente de 1.125 millones de escudos por ganancias del transporte, procedentes, principalmente, de ingresos de tránsito, y de 917 millones de escudos por transferencias invisibles, sobre todo de empresas relacionadas con el comercio de tránsito.

^z Convenio de 1928, enmendado por los acuerdos del 17 de noviembre de 1934 y 13 de octubre de 1964. En el artículo XXXII se establece que el Gobierno de Sudáfrica se compromete a asegurar al puerto de Lourenço Marques no menos

oeste, por el valle del Limpopo y recorre una distancia de 530 kilómetros, hasta Malvern en el límite de Rhodesia del Sur, donde empalma con los ferrocarriles de Rhodesia. Esta línea se tendió en 1955, con objeto de aliviar la congestión que se producía en Beira mediante otra ruta para el tráfico de tránsito de Rhodesia del Sur y Zambia. La línea es, en realidad, la prolongación del primitivo ramal a Guijá, en el valle del Limpopo, que se construyó a fin de facilitar la explotación de las fértiles tierras agrícolas del valle por agricultores europeos. En el valle del Limpopo, lugar del plan de colonización más grande de Mozambique, se producen cosechas comestibles, anacardos, algodón y arroz (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 275 a 285). Aparte estas dos líneas principales, la red de Lourenço Marques comprende un ramal a Goba, en la frontera con Swazilandia, que empalma con una línea de una sola vía construida recientemente en Swazilandia, que se destina principalmente al tránsito hacia el exterior de mineral de hierro, asbestos y azúcar de Swazilandia y a las importaciones de Swazilandia, principalmente de bienes de consumo y productos derivados del petróleo procedentes de Lourenço Marques. Por último, hay un ramal a Manhica y Magade que sirve al valle del Incomati, importante zona de producción de bananas y azúcar, que hasta 1955 se pensaba destinar a un plan de colonización europea en gran escala (*ibid.*, párr. 267). El ramal sirve a la compañía azucarera de Incomati y servirá, además, a la compañía azucarera Marracuene, constituida recientemente, que actualmente dedica 6.000 hectáreas a la producción de azúcar por colonos europeos (véase el apéndice I *supra*).

65. La segunda red ferroviaria principal, que parte de Beira, tuvo su origen en una línea troncal a Rhodesia del Sur, concluida en 1900 en virtud de un acuerdo de Portugal con el Reino Unido, y construida originalmente por intereses británicos, propietarios y directores hasta 1949. La línea se extiende directamente del puerto de Beira a Umtali, en la frontera con Rhodesia del Sur, donde empalma con el ferrocarril de Rhodesia. Hasta 1955 constituía el único acceso por el este a Rhodesia del Sur y debido a lo favorable de las tarifas y a los acuerdos de embarque, transportaba casi todas las cargas de minerales de exportación de Zambia (inclusive unas 700.000 toneladas de cobre por año) y, además, en parte, el cobre que se exportaba del sudeste de Katanga. Con la construcción de la línea de Limpopo, gracias a la cual se redujo en unos 16 kilómetros la distancia de transporte de la zona de producción del cobre de Zambia, y a causa de la congestión en el puerto de Beira, se preveía que buena parte del comercio de Zambia y de Katanga se desviaría por Lourenço Marques. En realidad las ventajas han quedado contrarrestadas por los derechos más altos de este último puerto** y hasta hace muy poco un 80% del cobre que se exportaba anualmente de la zona del cobre seguía pasando por Beira. Sin embargo, a fines de mayo de 1966, después de una controversia sobre tránsito ferroviario con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, el Gobierno de Zambia dio a conocer el propósito de desviar sus exportaciones de minerales por Lobito, en Angola, para evitar el tener que efectuar pagos al régimen ilegal, conforme a un acuerdo con el cual se esperaba desviar el tráfico de Katanga por Matadi. Sin embargo, hubo dificultades al respecto y en julio de 1966 se efectuaban negociaciones para convenir el empleo de otra ruta (véase el párrafo 61 *supra*).

66. Desde Dondo, en la línea Beira-Umtali, se extiende otra línea ferroviaria hacia el norte que atraviesa el río Zambeze en Sena y empalma con el ferrocarril de Malawi. Actualmente esta línea es el único acceso ferroviario al mar para el comercio exterior de Malawi. La línea entre Dondo y Sena, construida de 1919 a 1922, es de propiedad y funciona bajo la dirección

de la Trans-Zambezi Railway Company, que tiene la sede en Londres. A partir de Sena hay un tramo corto que penetra en Mozambique hasta unos 38 kilómetros, que está bajo la administración de una filial de los ferrocarriles de Malawi y empalma con la línea principal de Malawi en Port Herald. Al norte de Sena hay un ramal, concluido en 1949 y a cargo de la Administración de ferrocarriles de Mozambique, que va a Tete y que hoy se utiliza principalmente para transportar carbón de los yacimientos de Moatize a Beira.

67. Aunque primitivamente se construyó para satisfacer las necesidades de tránsito de los territorios vecinos, la red de Beira sirve también a una importante región interior del país, especialmente a las tierras altas de Chimoio, que tienen por centro a Vila Pery (en la línea Beira-Umtali) y deben su desarrollo, principalmente, a la existencia de la línea. Son el centro de la industria del tabaco, de la producción de kenaf (Companhia Têxtil do Púnguê) y de la manufactura de textiles de algodón (Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial), así como el lugar de un gran plan de colonización europea en el valle de Revuê (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 286 a 292). El maíz es el principal cultivo de las fincas agrícolas europeas de pequeña y media extensión, que ocupan 211.000 hectáreas en total de la *circunscrição* de Chimoio, pero también se exportan cantidades considerables de semillas oleaginosas, frutas, legumbres y sisal. Por otro lado, la línea traszambeziana pasa por una región poco habitada, que se dedica, sobre todo, a concesiones de silvicultura y madera. El ramal de 100 kilómetros a Tete (construido originalmente para transportar carbón de Moatize) tenía por objeto abrir las regiones de Angónia, Macanga y Maravia a la colonización agrícola europea, pero salvo en la meseta de Angónia y los altos próximos a la frontera de Rhodesia del Sur, la región de Tete aún se mantiene en un estado de desarrollo relativo.

68. La tercera red ferroviaria importante consiste en una línea que va del puerto marítimo de Nacala hacia el oeste y recorre unos 720 kilómetros hasta Catur, en el distrito de Nyassa; actualmente se le está prolongando para que pasando por Vila Cabral llegue hasta las costas del lago Nyassa y proporcione otra ruta al transporte de tránsito de Malawi, con lo cual se reducirá la congestión del puerto de Beira. Esta línea, que se comenzó a construir en 1924, es potencialmente una de las más importantes para la economía interna de Mozambique. Se trazó con objeto de facilitar el transporte de algodón, sisal, maíz, tabaco desde el interior y aumentar la colonización, la minería y la ganadería europeas en la región que rodea al lago Nyassa y llega hasta Vila Cabral.

69. Además de las tres principales redes ferroviarias hay tres pequeños ferrocarriles para el transporte de productos agrícolas. El más largo de éstos se extiende hacia el interior desde el puerto marítimo de Quelimane a Namacurra y Mocuba, recorriendo una distancia de unos 145 kilómetros, y sirve para el transporte de algodón, sisal y otros productos de la región así como del té de Milange, Tacuane y Gurue. La región que se extiende de Namacurra a Mocuba comprende alrededor del 28% del área de plantíos de sisal (unas 15.800 hectáreas); casi todas las plantaciones europeas de té (en 1962-1963 había 17 compañías con 15.227 hectáreas), en cambio, se hallan en las proximidades de Gurue, Milange y Tacuane. En el sur hay dos líneas aisladas, la primera del puerto de Inhambane que va por el sur hasta Inharrime, a una distancia de 99 kilómetros, y la segunda de Vila de João Belo, en la ribera norte del Limpopo, hasta Chicomo, a una distancia de 140 kilómetros. Estas dos líneas, que originalmente se construyeron para servir a las plantaciones de sisal y a las concesiones de algodón, antes del desarrollo de suficientes transportes por carretera, son hoy reliquias del pasado antes que unidades eficaces de una moderna red de transporte.

70. Salvo dos líneas de la red de Beira, todos los ferrocarriles fueron construidos por las autoridades portuguesas, pertenecen a la Administración de puertos, ferrocarriles y transportes de Mozambique, institución autónoma, que también se encarga del funcionamiento y administración de aquéllos. Sin embargo, esa parte de la red de Beira al sur del Zambeze, esto es, la línea de Beira-Umtali y el ferrocarril traszambeziano fueron construidos por compañías británicas, subconcesionarias de la

del 40% del tonelaje total del tráfico comercial y de importación, procedente de ultramar, en la "zona de competencia". Se define esta zona como la limitada por las líneas trazadas entre los depósitos de mercancías en tránsito que sirven a Pretoria Springs, Vereeniging, Klerksdorp, Welverdiend, Krugersdorp y Pretoria.

** Los derechos portuarios de Lourenço Marques se vinculan, conforme al convenio de Mozambique, con los derechos de los puertos terminales sudafricanos y son *ad valorem*, en tanto que los de Beira varían según el producto y a veces se determinan por acuerdos.

Moçambique Company, a la que se había otorgado la concesión para todo el territorio entre los ríos Zambeze y Save, inclusive el puerto de Beira^{bb}; en 1949, venciada ya la concesión de la Moçambique Company, el Gobierno portugués compró la línea de Beira-Umtali a la concesionaria, la Beira and Mashonaland Railway Company, por 4 millones de libras esterlinas. Aunque el funcionamiento y la administración están a cargo de la Administración de ferrocarriles de Mozambique, la propiedad corresponde al Ministerio de Hacienda de Portugal, y el Gobierno de Mozambique sólo recibe una parte de las utilidades. No se han tomado medidas para comprar el ferrocarril traszambeziiano, probablemente porque no es una línea muy lucrativa. Salvo

^{bb} Por una de las disposiciones del Convenio del Africa Oriental, concertado en 1891 entre Portugal y el Reino Unido, Portugal debía construir un ferrocarril que uniera a Mashonalandia, que se hallaba entonces bajo el control de la British South Africa Company, con la bahía de Púnguè (en que se halla hoy Beira). La obligación de construir el ferrocarril se traspasó a la Moçambique Company, a la que al año siguiente el Gobierno portugués otorgó por escrito derechos de concesión en el que ahora es el distrito de Manica e Sofala.

el corto tramo de Sena a la frontera con Malawi, de cuyo funcionamiento y administración se encarga una filial de los ferrocarriles de Malawi, éste es el único ferrocarril de Mozambique de propiedad extranjera^{cc}.

71. Cabe observar que de las siete redes ferroviarias sólo las que se encargan del tráfico de tránsito de Estados vecinos arrojan una utilidad neta. Por lo que se refiere a la línea traszambeziiana, esta utilidad la absorbe casi enteramente el pago de intereses y la amortización del capital prestado (véase más adelante). Las redes más lucrativas son las de Lourenço Marques y Beira, que sirven a Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Con las utilidades de estas redes se subvenciona a los otros dos ferrocarriles de propiedad del Estado, cuyo funcionamiento arroja pérdida considerable:

^{cc} Hay una línea de 88 kilómetros de longitud, de vía an-gosta, perteneciente a la Sena Sugar Estates, Ltd., que va del ingenio que esta empresa tiene en Marroumeu hasta el ferrocarril traszambeziiano en Caia. Se trata de una línea para el uso exclusivo de la compañía y no de un ferrocarril comercial propiamente dicho.

FERROCARRILES DE MOZAMBIQUE: RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE 1963

	Ingresos brutos (en millones de escudos) (1)	Gastos de explotación (en millones de escudos) (2)	Coefficiente de operaciones (porcentaje de los gastos respecto de los ingresos) (3)
A. Ferrocarriles de propiedad del Estado			
Lourenço Marques	561,9	248,6	44,25
Beira ^a	375,5	196,2	52,32
Moçambique	39,3	61,1	155,63
Tete	21,7	30,8	141,77
Quelimane	14,0	26,9	191,96
Gaza	10,2	14,5	142,55
Inhambane	5,5	12,8	243,20
B. Ferrocarriles de propiedad privada			
Traszambeziiano	97,3	85,1	87,49

Fuente: Mozambique, Administração dos Serviços dos Portos, Caminhos de Ferro e Transportes, *Relatório*, 1963.

^a Propiedad del Ministerio de Hacienda de Portugal.

B. Historia del ferrocarril traszambeziiano

72. Como se ha explicado antes, el ferrocarril traszambeziiano se extiende de Dondo, aproximadamente a 29 kilómetros al oeste de Beira, hasta Sena, en la ribera sur del Zambeze, recorriendo una distancia de 289 kilómetros. En el norte, empalma con el ferrocarril centroafricano, que comprende un corto tramo (69 kilómetros) entre Sena y Port Herald, en Malawi, donde la línea enlaza con el ferrocarril de Malawi. En el sur, en Dondo, el ferrocarril traszambeziiano empalma con el ferrocarril de Beira, que une a Beira con Umtali, en Rhodesia del Sur.

73. Destinado principalmente a dar salida al tráfico de Nyasalandia, hoy día Malawi, la concesión para construir el ferrocarril la otorgó primero la Moçambique Company, en 1898, a un belga, el Sr. L. A. H. Porcheron, que inmediatamente traspasó sus derechos a la Compagnie du Chemin de Fer de Beira au Zambéze, constituida con ese objeto por capitales británicos, franceses y belgas y matriculada en Bruselas. Sin embargo, aunque se efectuaron estudios en 1905 y 1906, el trazado del ferrocarril se demoró hasta la construcción de un empalme en Nyasalandia. La garantía del tráfico de tránsito se consideraba esencial porque la zona de Mozambique que atravesaba la ruta propuesta, que estaba, entonces como ahora, ocupada principal-

mente por concesiones forestales, no se hallaba suficientemente desarrollada como para sostener a un ferrocarril.

74. En 1912 se había trazado el Shire Highlands Railway (hoy día ferrocarriles de Malawi) de Blantyre a Port Herald, en Nyasalandia, y ese año se celebraron contratos entre los dos Gobiernos y la British Central Africa Co., Ltd. para construir un ramal de Port Herald a Chindio, en la ribera norte del Zambeze^{dd}. Resuelto este problema, se volvió a prestar atención al trazado de la línea traszambeziiana, y el 11 de octubre de 1912 se firmó un nuevo contrato de concesión entre la Moçambique Company^{ee} y la concesionaria existente, que reemplazó al contrato de 1898 y establecía la transferencia de todos los derechos a una nueva compañía del mismo nombre que había de constituirse con un capital de 21 millones de francos

^{dd} Para el tramo de 38 kilómetros que pasaba por Mozambique se otorgó una concesión (*Diário do Governo*, 15 de agosto de 1912) válida por 99 años, período después del cual el ferrocarril y su equipo revertirían sin pago al Gobierno portugués. La concesión comprendía también el derecho de construir y administrar un puente sobre el río Zambeze. El Central Africa Railway, que administra la línea, es una filial que pertenece íntegramente a los ferrocarriles de Malawi.

^{ee} El contrato, con ciertas modificaciones, fue aprobado por Decreto 240, del 26 de noviembre de 1913.

belgas. A la nueva compañía se le iban a dar el derecho de construir y explotar la línea por un período de 99 años y ciertas concesiones de tierras y minerales (véase la sección siguiente).

75. En 1913 se constituyó un sindicato formado por dos financieros belgas, M. C. Morresseaux y el General Thuys, que suscribieron juntos 14 millones de francos; el resto de la suscripción estuvo a cargo de la Banque d'Outremer, el Crédit Liégeois y un grupo británico vinculado con los ferrocarriles de Beira, pero el estallido de la primera guerra mundial impidió desde el principio todo trabajo; el general Thuys falleció en 1915 y el control de la compañía pasó a manos británicas.

76. La presión en favor de la construcción del ferrocarril se reanimó después de la primera guerra mundial. Por aquel entonces los fondos de que disponía la compañía ya no eran suficientes para financiar la inversión de capital y como la Moçambique Company se negó a participar, fuera de garantizar un dividendo del 3% en caso de que resultaran insuficientes las utilidades de la compañía, así como a financiar las reparaciones una vez construido el ferrocarril, la compañía tuvo que buscar otras fuentes de ayuda para reunir el capital inicial necesario. A consecuencia de ello, en 1919, los accionistas que formaban la minoría belga transfirieron sus derechos con autorización de las autoridades portuguesas (Orden 2.039, 4 de noviembre de 1919) al Gobierno de Nyasalandia, a cambio de que este último garantizara el pago de intereses y la amortización de una emisión de bonos de 1.200.000 libras esterlinas para financiar la construcción del ferrocarril. Un mes más tarde se constituyó la Trans-Zambezia Railway Company. Los trabajos de construcción del ferrocarril comenzaron al año siguiente y quedaron concluidos en 1922.

77. En 1922 el ferrocarril traszambeziense había establecido su terminal del norte en Sena, en la ribera sur del Zambeze y la carga se llevaba al otro lado del río por embarcaciones que llegaban hasta el ferrocarril centroafricano, en Chindio, en la ribera norte. La compañía había concertado el año precedente otro acuerdo con el Gobierno de Nyasalandia para garantizar una nueva emisión de bonos, con objeto de adquirir una flota fluvial, a cambio de lo cual se reconocía al Gobierno de Nyasalandia, al Central Africa Railway y a la Shire Highlands Railway el derecho de nombrar a la mitad de los directores del consejo de administración de la Trans-Zambezia Company.

78. Se requirió apoyo adicional del Gobierno de Nyasalandia para construir el puente del Zambeze y el estribo sur. El puente, construido entre 1930 y 1935, tiene cuatro kilómetros y medio de largo y atraviesa el Zambeze entre Sena y Chindio. Como ninguna de las tres compañías ferroviarias podía costear la construcción, el Shire Highlands Railway se liquidó voluntariamente, y su capital comercial, así como su participación mayoritaria en el capital comercial del Central Africa Railway pasó a los ferrocarriles de Nyasalandia, que acababan de constituirse. Los trabajos del puente se emprendieron en nombre del Central Africa Railway, con el apoyo de los ferrocarriles de Nyasalandia, que recibieron un préstamo de 3 millones de libras esterlinas, otorgado por el Gobierno de Nyasalandia a cambio de una participación con control. Para la construcción del estribo sur, la Trans-Zambezia Company recibió un anticipo de 399.000 libras esterlinas (31.900.000 escudos) a cambio de bonos de renta asegurados por las ganancias del acceso ferroviario.

79. Más adelante se trata con más detalle de la propiedad y finanzas actuales de la compañía. Es suficiente señalar que hasta 1964 el 25% de las acciones emitidas y casi todo el capital de préstamo pertenecieron sucesivamente al Gobierno de Nyasalandia y al Alto Comisionado de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Después de la disolución de la Federación, las acciones y el capital se transfirieron a Four Milbank Nominees, Ltd., compañía tenedora británica.

C. Condiciones de la concesión

80. La concesión original, de 17 de mayo de 1897, y el contrato de 11 de octubre de 1912, enmendado por un acuerdo de 7 de noviembre de 1913 y aprobado por Decreto 240 (*Diário do Governo*, 26 de noviembre de 1913), constituyen la base jurídica de las operaciones de la Trans-Zambezia Railway Company.

La concesión y el contrato, que nombran a los predecesores de la compañía, se enmendaron a fin de aplicarlos a esta última cuando se formó la nueva compañía en 1918 (convenio de fecha 10-26 de abril de 1918). El contrato se enmendó ulteriormente mediante la Orden 2.039, de 4 de noviembre de 1919, que incorporaba las modificaciones requeridas por el contrato condicional de 6 de agosto de 1919 concertado entre el Gobierno de Nyasalandia y los gestores del ferrocarril (véase el párr. 76, *supra*).

81. La concesión y el contrato, así como los acuerdos subsiguientes, fueron firmados por la Moçambique Company en virtud de los derechos exclusivos que les concedía su Carta Real. Al expirar la Carta en julio de 1942, el Gobierno de Portugal sucedió a la Moçambique Company como cesionario.

82. En virtud de las condiciones del contrato de 1912, la concesión se hizo por un período de 99 años (que termina en el año 2.018), después del cual el ferrocarril y todo el equipo fijo y móvil revertirá al cesionario sin pago. Además, en cualquier momento después de los primeros veinte años a partir de la fecha del contrato, el cesionario puede rescindir la concesión rescatando el ferrocarril y el equipo por un precio calculado sobre la base de los beneficios líquidos de la compañía en el curso de los siete años precedentes. En el caso de que los servicios se interrumpieran total o parcialmente, el cesionario puede hacerse cargo del funcionamiento del ferrocarril y si, después de transcurridos tres meses, la compañía continúa en la imposibilidad de volver a asumir sus responsabilidades, puede rescindir la concesión.

83. El contrato concedía a la Trans-Zambezia Railway Company el derecho de construir y explotar la línea existente y todas las instalaciones necesarias, así como el de utilizar franjas de tierra de 50 metros de ancho a ambos lados de la línea. También le concedía el derecho de primera opción para construir un ramal hasta Tete, derecho que la compañía no ejerció; oportunamente el Gobierno construyó dicho ramal. El contrato contenía una garantía de que durante el período de la concesión no se construiría ningún otro ferrocarril hasta 100 kilómetros de la línea traszambeziense.

84. Además, el contrato concedía a la compañía el uso de parcelas de terreno de 2.500 hectáreas cada una, que se ubicarían alternativamente a ambos lados de la línea ferroviaria a intervalos de 20 kilómetros. Se concedió a la compañía el derecho de establecer plantaciones, empresas industriales o compañías madereras, y de dedicarse a la prospección de minerales en dichos terrenos. En el caso de que se descubriesen minerales, la compañía podía conservar sus derechos mineros sobre el 10% de la superficie, y debía ceder el 90% restante al cesionario. En realidad, salvo el corte de madera para su propio uso, la compañía no parece haberse valido de estos privilegios.

85. Tanto la concesión inicial como el contrato de 1912 prohibían establecer tarifas de fletes diferenciales. El contrato incluía una tabla de las tarifas que se deberían cobrar y estipulaba que la compañía debería obtener la aprobación del cesionario para aplicar cualquier modificación a las mismas.

86. Las disposiciones financieras del contrato establecían que el cesionario debía recibir el 30% de los beneficios anuales líquidos⁴⁴ y debía tener el derecho de designar a sus representantes en la junta de directores (véase *infra*). El cesionario se comprometía a garantizar el pago de un dividendo del 3% por las acciones de la compañía así como la amortización de bonos emitidos para financiar reparaciones del ferrocarril impuestas por fuerza mayor. La compañía debía sufragar íntegramente la financiación de la construcción propiamente dicha de la línea férrea.

87. La concesión de la Trans-Zambezia Company se extendió solamente hasta el río Zambezi y no incluye ni el puente terminado en 1935 ni el tramo de 38 kilómetros que se extiende desde el Zambeze hasta la frontera de Nyasalandia, y queda

⁴⁴ Los beneficios líquidos son beneficios netos, a saber después de haberse deducido los gastos de explotación, los gastos generales (*encargos sociais*), los gravámenes y la amortización de bonos.

fuera del territorio de la Moçambique Company. La concesión de 15 de agosto de 1912 concedida a la Central Africa Railway Company respecto de este tramo es análoga a la de la Trans-Zambézia Company, con las siguientes excepciones: a) la línea férrea y el puente revertirán al Gobierno de Portugal en el año 2.011, b) no incluye tierras ni derechos mineros con excepción de la línea férrea y de una franja de 50 metros a cada lado de la línea, y c) las tarifas que se cobran en territorio de Mozambique no pueden exceder las tarifas análogas establecidas en Nyasalandia (actualmente Malawi).

D. Organización y finanzas de la compañía

88. La Trans-Zambézia Railway Company es una empresa británica con sede en Londres, y funciona con arreglo a las leyes portuguesas. El capital por acciones emitido es de 600.000 libras esterlinas, en 600.000 acciones de una libra cada una, íntegramente pagadas. Los accionistas son el Gobierno de Portugal, con 200.000 acciones; la Apcob Nominees, Ltd. (Londres), que representa a los fundadores de la compañía, con 200 acciones; la Four Milbank Nominees, Ltd. (Londres), con 150.000 acciones; y la Companhia de Moçambique, con 100 acciones. Antes de 1964, las acciones que ahora son propiedad de la Four Milbank, Ltd. que, del mismo modo que la Apcob Ltd. es una compañía tenedora, estuvieron sucesivamente en poder del Gobierno de Nyasalandia y del Alto Comisionado de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Después de disolverse la Federación pasaron a ser propiedad británica.

89. En virtud de los estatutos de la compañía, de 3 de marzo de 1921, con las enmiendas introducidas posteriormente, de los diez directores cuatro son designados por Portugal, tres por Malawi y uno por los ferrocarriles de Malawi. En 1965 la junta de directores quedó constituida por V. L. Oury (presidente), A. H. Ball, J. F. Harrod y I. R. Hayward, J. R. Pike, P. A. Clarke Vincent y los siguientes miembros portugueses: J. B. Correa da Silva, M. da Cruz Alvura, A. R. Potier y J. B. Schiappa de Azevedo. La compañía tiene un convenio de explotación con los ferrocarriles de Malawi y su subsidiaria, la Central Africa Railway, y hasta 1964 las tres compañías tenían una administración común.

90. Los gastos de construcción del ferrocarril se financiaron en gran parte mediante bonos garantizados por las autoridades de Nyasalandia y un préstamo del ferrocarril de Nyasalandia. En 1965, el préstamo de capitales pendiente era de 2.800.000 libras esterlinas en debentures y bonos de renta, todos en poder de la Four Milbank Nominees, Ltd. El activo fijo, al costo, ascendía a poco más de 5 millones de libras esterlinas, de las que aproximadamente 3 millones correspondían al ferrocarril y las instalaciones conexas, 401.600 libras al acceso sur al puente del Zambeze, y 1.600.000 libras al material rodante. En 1964 la compañía inició un programa de reorganización, incluso el paso progresivo de locomotoras a vapor a locomotoras diesel. La primera medida en este sentido consistió en la compra, en 1964, de tres locomotoras eléctricas diesel por un costo de 34.913 libras esterlinas.

91. Los resultados obtenidos por la compañía en los años 1962 a 1964 fueron los siguientes:

	1962 (en libras esterlinas)	1963 (en libras esterlinas)	1964 (en libras esterlinas)
Ingresos brutos	1.358.523	1.216.394	1.237.113
Gastos de operación	1.061.464	1.064.189	1.010.422
Ingresos netos	297.059	152.205	226.691
Otros gastos*	46.681	58.860	53.648
Impuestos sobre la renta y de defensa de Mozambique	119.437	53.802	77.423
Intereses de los bonos y obligaciones	65.463	61.180	62.034
Superávit a reserva	79.851	—	43.946

* Incluye los intereses de la compra a crédito de material rodante y de un anticipo temporal de 285.476 libras del Gobierno de Malawi.

92. Como puede observarse en el cuadro anterior, el ferrocarril no ha sido una empresa muy lucrativa, y sus ingresos netos, en la mayoría de los años, apenas bastaron para cubrir el pago de los intereses de sus préstamos de capital. En 1963 suspendió el pago de los intereses sobre parte de sus bonos de renta y en 1964 el superávit acumulado disponible era de sólo 90.480 libras esterlinas. Ello se debe en parte a la falta de desarrollo agrícola o de otro orden en la región que atraviesa el ferrocarril, y en parte a la alta proporción de los gastos de operación respecto de los ingresos brutos (el 81,68% en 1964), y a la estructura de las tarifas, que según se informó en 1963 estaban entre las más elevadas del Africa meridional, lo que estimulaba la competencia del transporte por carretera. En 1965 la compañía negoció una revisión de su anterior contrato de explotación con los ferrocarriles de Malawi y los ferrocarriles centroafricanos, por la que se estableció una modificación en el sistema de tarifas y pasajes a fin de mejorar su posición competitiva.

E. Operaciones y función económica del ferrocarril

93. La región interior del país servida por el ferrocarril tras-zambeziano que se halla entre Dondo y Sena, y la zona a la que sirve el ramal a Tete, están poco pobladas y relativamente subdesarrolladas. Fuera de los yacimientos de carbón de Moatize, cerca de Tete, los principales centros de actividad económica

son los ingenios azucareros de Sena (que, por otra parte, exportan gran parte de su producción por vía fluvial al puerto de Chinde), aserraderos, las plantaciones de algodón y un núcleo de agricultores y ganaderos europeos en la meseta de Angónia. En consecuencia, el ferrocarril depende considerablemente del transporte de mercaderías y pasajeros que se dirigen a Malawi o parten del país. Los planes de desarrollo en gran escala del potencial mineral y agrícola del valle del Zambezi, que se están estudiando desde comienzos del decenio de 1950, tal vez disminuyan oportunamente esta dependencia (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 293 a 295).

94. Los elevados costos de operación, así como la carga de los pagos de intereses y la amortización del capital tomado en préstamo, especialmente respecto del puente del Zambeze, requieren que las tres compañías que explotan la línea fijen tarifas que, según se informa, son las más altas del Africa meridional. En consecuencia, las cargas se limitan principalmente a mercancías de poco volumen y gran valor. El tráfico a Beira está constituido principalmente por carbón de Moatize, y por exportaciones agrícolas, principalmente azúcar, cacahuetes, tabaco, té y madera; además, desde 1954 se transporta piedra caliza de Malawi a la fábrica de cemento de Dondo. El tráfico hacia el interior está constituido principalmente por importaciones de mercancías generales, pues ni Malawi ni el interior de Manica y Sofala están suficientemente desarrolladas como para importar cantidades apreciables de equipo pesado o de

materiales de construcción. El tonelaje total de mercaderías que se transportan anualmente aumentó de poco menos de 100.000 toneladas antes de la segunda guerra mundial a un promedio de 750.000 toneladas durante el decenio de 1950, y alcanzó el máximo de 873.483 toneladas en 1962, en que el tráfico de salida fue aproximadamente el doble del de entrada. En 1964, último año para el que se dispone de informaciones, el tráfico ascendió a 801.906 toneladas; los principales productos de exportación fueron tabaco (15.372 toneladas), té (14.272 toneladas), cacahuets (22.751 toneladas) y maíz (20.508 toneladas) de Malawi, y productos de madera (84.649 toneladas), azúcar (17.304 toneladas), hilaza de algodón (7.493 toneladas) y algodón sin desmotar (7.112 toneladas) de Mozambique. Las principales importaciones fueron de mercaderías generales (100.530 toneladas), nafta y parafina (32.977 toneladas), cemento (3.775 toneladas) y abono (18.090 toneladas). El ferrocarril transportó también 53.584 toneladas de piedra caliza y 120.936 toneladas de carbón y coque de Moatize⁸⁸.

95. Como se ha explicado anteriormente, el ramal a Tete se construyó en 1949 principalmente con objeto de que la Companhia Carbonífera de Moçambique, creada recientemente, emprendiera la explotación en gran escala de los ricos depósitos de carbón de Moatize. En realidad, del mismo modo que en el caso de los productos agrícolas de bajo valor, el alto costo de los transportes ha obstaculizado la exportación de carbón y su venta a la zona de Lourenço Marques, donde no puede competir con el carbón más barato del Transvaal. Hasta la reciente introducción de las locomotoras diesel, el carbón se empleaba principalmente como combustible para los ferrocarriles de Beira y el traszambeziario, pues una de las condiciones que debía cumplir la concesión minera era abastecer gratuitamente de combustible al ferrocarril de Beira (véase A/6000/Rev.I, cap. V, anexo I, párrs. 261 y 262).

96. El elevado precio de los pasajes, junto a la competencia del transporte aéreo, que es barato, también han privado al ferrocarril de gran parte del posible tráfico de pasajeros. Como resultado de ello, el número de pasajeros transportados disminuyó de 190.300 en 1954 a 153.614 dos años más tarde, y en 1964 apenas excedía el nivel alcanzado diez años antes.

97. No se tienen informaciones relativas a las condiciones de trabajo en el ferrocarril. Cabe señalar, sin embargo, que la compañía ha establecido un programa de aprendizaje y un plan trienal de capacitación destinado a ascender a los africanos a cargos importantes de ingenieros, mecánicos y jefes de estación adjuntos.

Anexo I

Angola: Servicios ferroviarios

	Kilómetros
A. Ferrocarriles de propiedad del Estado	
Ferrocarril de Luanda:	615
Luanda a Malanje	516
Empalme Dondo (Zenza do Itombe a Dondo)	55
Empalme Golungo-Alto (Canhoca a Golungo-Alto)	33
Línea del distrito Congo, en construcción:	
Puerto y estación	11
Ferrocarril de Moçamedes:	924
Moçamedes a Sá da Bandeira	276
Sá da Bandeira-Vila Serpa Pinto ..	518
Empalme Chibia (Sá da Bandeira a Chiange)	130
TOTAL de propiedad del Estado	1.539

⁸⁸ A consecuencia de la decisión de Zambia de no utilizar los servicios de transporte de los Rhodesian Railways, parte de las importaciones y exportaciones de Zambia son ahora transportadas por la Trans-Zambézia Rapiways. Por el momento, no se dispone de estadísticas al respecto.

B. Ferrocarriles de propiedad privada

	Kilómetros
Ferrocarril de Benguela:	1.588
Lobito a la frontera oriental	1.348
Apartaderos, vías muertas y playas	182
Ferrocarril de Amboim:	129
Amboim a Gabela	129
TOTAL de propiedad privada	1.717
TOTAL GENERAL	3.256

Fuente: Angola, *Anuário Estatístico*, 1963, pág. 233.

Anexo II

Mozambique: Servicios ferroviarios (con exclusión de los de vía angosta)

	Kilómetros
A. Ferrocarriles de propiedad del Estado	
Ferrocarril de Lourenço Marques: ..	1.119
Lourenço Marques a Ressano García	98
Lourenço Marques a Goba	58
Moamba a Malvéria	527
Lourenço Marques a Xinavane.....	94
Ramales	27
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	315
Ferrocarriles de Beira:	497
Beira a Machipanda	318
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	179
Ferrocarril de Tete:	281
Dona Ana a Moatize	255
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	26
Ferrocarril de Quelimane:	159
Quelimane a Mocuba	145
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	14
Ferrocarril de Mozambique:	734
Nacala a Nova Freixo	646
Tramo de Monapo a Lumbo	43
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	45
Ferrocarril de Inhambane:	108
Inhambane a Inharrime	92
Caminos secundarios	7
Empalmes, desvíos y caminos de servicio	9
TOTAL de propiedad del Estado	2.898
B. Ferrocarriles de propiedad privada	
Ferrocarril traszambeziario:	360
Dondo a Sena	333
Apartaderos, vías muertas y caminos de servicio	27
Ferrocarril centroafricano:	43
Sena a la frontera con Malawi.....	43
TOTAL de propiedad privada	403
TOTAL GENERAL	3.301

Fuente: Mozambique, *Anuário Estatístico*, 1963, pág. 509.

APENDICE V

Relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica y Rhodesia del Sur

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-2
I. RELACIONES ECONÓMICAS DE MOZAMBIQUE CON SUDÁFRICA	
A. Generalidades	3-6
B. La Convención de Mozambique	7-13
C. Suministro de mano de obra a Sudáfrica....	14-22
D. Relaciones comerciales con Sudáfrica.....	23-33
E. Inversiones de Sudáfrica en Mozambique....	34-41
II. RELACIONES ECONÓMICAS DE MOZAMBIQUE CON RHODESIA DEL SUR	
A. Generalidades	42-52
B. Relaciones comerciales con Rhodesia del Sur	53-70
C. Mano de obra migrante	71-79

CUADROS

	Página
1. Mozambique: comercio especial con los países vecinos	511
2. Mozambique: valor del comercio especial con Sudáfrica por principales productos	512
3. Mozambique: valor del comercio especial con Rhodesia del Sur por principales productos..	512
4. Comercio de tránsito de Sudáfrica vía Mozambique por principales productos	513
5. Comercio de tránsito de la Federación de Rhodesia y Niasalandia vía Mozambique por principales productos	513

INTRODUCCIÓN

1. La reciente evolución política del Africa meridional ha hecho que se concentre la atención en las relaciones entre Sudáfrica, Rhodesia del Sur y Portugal. En 1964, se comunicó que el Sr. Verwoerd, Primer Ministro de Sudáfrica, había hecho un llamamiento de colaboración positiva entre Sudáfrica y sus vecinos del norte y había sugerido un plan de ayuda económica y posiblemente el establecimiento de una zona de libre comercio. Esta sugestión, a la que siguieron informes sobre una alianza entre Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur, se ha repetido en varias ocasiones en declaraciones de hombres políticos y en artículos de periódicos, especialmente en Rhodesia del Sur y en Sudáfrica.

2. En el presente documento se pretende mostrar la naturaleza y evolución de las relaciones económicas entre Mozambique y sus vecinos, y se señala la importancia del comercio de tránsito, del que depende casi una cuarta parte de los ingresos de divisas de Mozambique. Otras formas de colaboración económica, especialmente el reciente incremento de las inversiones sudafricanas en Mozambique, también se exponen en este trabajo.

I. RELACIONES ECONÓMICAS DE MOZAMBIQUE CON SUDÁFRICA

A. Generalidades

3. Las relaciones económicas de Mozambique con la República de Sudáfrica giran en torno a su proximidad al Transvaal, la región industrial más importante de la República. La zona de Witwatersrand, unida a la de Pretoria y el Transvaal meridional, ocupa el primer puesto en la producción de minerales básicos, de oro y de carbón de la República, y de allí procede la mitad de la producción industrial de Sudáfrica. Contiene aproximadamente el 40% de la población europea de la República y el 45% de los trabajadores industriales. El Transvaal es también un importante productor de maíz, trigo, tabaco y frutos cítricos y posee grandes zonas de ranchos cerca de la frontera con Rhodesia del Sur.

4. La zona vecina de Mozambique, mucho menos desarrollada económicamente, sirve a la vez de reserva de mano de obra no calificada (véase la sección C) y de salida natural al mar para aquella región de alta productividad. Lourenço Marques, que cuenta con el mejor puerto natural en la costa oriental de Africa, está 100 millas más cerca de Johannesburgo que el puerto sudafricano importante más próximo^a y está unido por una línea directa de ferrocarril, mientras que la mayor distancia por mar a los puertos europeos se compensa en parte porque los fletes fijados por los acuerdos de la conferencia internacional de armadores son más bajos. Con arreglo a lo dispuesto en la Convención de Mozambique (expuesta más adelante), se garantiza al puerto de Lourenço Marques no menos del 40% del tránsito comercial de mercancías marítimas importadas a una zona concreta del Transvaal, denominada "zona competidora", que comprende el núcleo industrial de la región. Por consiguiente, Lourenço Marques es uno de los puertos más importantes para el comercio de la República. Ordinariamente pasa por allí el 12% del tonelaje total que circula por los puertos que sirven a Sudáfrica.

5. En cuanto al comercio directo, Sudáfrica ocupa el segundo lugar, después del Portugal metropolitano, entre los países que comercian con Mozambique. Sin embargo, el volumen total del comercio es relativamente pequeño y en 1964 representó sólo el 11,42% del valor total del comercio exterior del territorio; la balanza comercial es notablemente favorable a Sudáfrica (véase el cuadro 1). Esto se debe en parte a la política proteccionista que tradicionalmente aplican ambos Gobiernos; por ejemplo, Portugal impuso controles cuantitativos, aranceles y otras cargas para dar preferencia en Mozambique al comercio con el país metropolitano y con otros territorios de la zona del escudo. Por otra parte, esta diferencia responde al nivel mucho más alto de industrialización y diversificación de la economía de Sudáfrica, que tiene una producción propia ampliamente suficiente de los productos agrícolas que exporta Mozambique.

6. En octubre de 1964, los dos Gobiernos firmaron unos acuerdos^b que enmiendan la Convención de Mozambique y establecen una colaboración económica más íntima entre ambos, sobre todo en lo relativo a la planificación y la inversión. Estos acuerdos tuvieron como consecuencia, entre otras, la adopción de medidas por ambos países para estimular la inversión de capital sudafricano en Mozambique, cuyas repercusiones son ya visibles en varias de las grandes empresas descritas más adelante, en la sección E. Al mismo tiempo, Portugal ha hecho considerables inversiones en la nueva refinería de petróleo SONAREP de Lourenço Marques, parte de cuya producción está destinada a la venta a Sudáfrica. Aparte de estos acontecimientos, apenas hubo cambio, hasta el final de 1965, en el volumen de comercio entre ambos países, según aparece en las estadísticas oficiales; este comercio ha ido aumentando con regularidad en los últimos cinco años.

B. La Convención de Mozambique

7. Las relaciones económicas de Mozambique con Sudáfrica se basan sobre todo en las disposiciones de la Convención de Mozambique de 1928, revisada y ampliada en 1934, 1936, 1939, 1940, 1952 y 1964. La Convención consta de tres partes, que versan respectivamente sobre la contratación de mano de obra para las minas del Transvaal, el comercio de tránsito y el comercio entre los dos países. La Convención de 1928 fue precedida por acuerdos que datan de 1875, el más importante de los cuales fue un convenio de 1° de abril de 1909 entre Portugal y la República del Transvaal, precursor de la Convención de Mozambique.

8. Los primeros acuerdos entre Transvaal y Portugal se referían al comercio y a la construcción del ferrocarril a

^a Las distancias por ferrocarril entre los puertos importantes y Johannesburgo son las siguientes: Lourenço Marques, 395 millas; Durban, 494 millas; Port Elizabeth, 714 millas; y Ciudad de El Cabo, 956 millas.

^b Acuerdos de 13 de octubre de 1964 entre el Gobierno de la República de Sudáfrica y el Gobierno de Portugal. *Republic of South Africa Treaty Series*, Nos. 8, 10 y 11, 1964.

Lourenço Marques (entonces bahía de Delagoa), y el propósito del Gobierno del Transvaal era evitar la dependencia de las colonias británicas del sur. La necesidad de mano de obra africana importada no surgió hasta 1886, cuando se descubrió oro en Witwatersrand. En adelante, según aumentaba la demanda de trabajadores, Portugal utilizaba el suministro de mano de obra de la actual Mozambique como instrumento para obtener concesiones para su línea ferroviaria frente a la intensa competencia que ofrecían los ferrocarriles de El Cabo y de Natal. Entre 1903 y 1910, un período de reconstrucción después de la guerra bóer, casi el 89% de los trabajadores africanos empleados en las minas procedían del África oriental portuguesa. Precisamente porque las minas dependían de Mozambique para conseguir mano de obra barata, Portugal pudo negociar el convenio de 1909 con Transvaal, cuyas condiciones eran tan favorables a Portugal que al hacerse públicas casi acarrearón la ruptura de la convención de Estados Sudafricanos que estaba entonces reunida con objeto de constituir la Unión. En virtud de ese convenio, Portugal, a cambio de permitir la contratación de africanos en Mozambique, obtuvo una garantía por diez años de que el 50% del comercio de ultramar del Transvaal pasaría a través de Lourenço Marques, más un compromiso de libertad de comercio sin restricción alguna entre las dos partes. Hasta que Sudáfrica denunció este convenio en 1922, aproximadamente el 29% del valor de las exportaciones de Mozambique se enviaba al Transvaal sin pago de derechos de aduana.

9. Una de las consideraciones que probablemente indujeron a Sudáfrica a dar por terminado el convenio fue que las minas de Transvaal empezaron a depender menos de la mano de obra de Mozambique, a medida que se disponía de trabajadores de otra procedencia. En 1922 los trabajadores de Mozambique representaban únicamente el 40% del total de la fuerza de trabajo empleada en las minas y en 1958 esa cifra había bajado al 26%.

10. La validez del convenio terminó en 1923 y a partir de esa fecha hubo varios años de intensas negociaciones entre los dos Gobiernos, que llegaron a su punto culminante en 1927, cuando Portugal zanjó la cuestión restringiendo severamente la emigración de trabajadores de Mozambique a las minas (Decreto 13.651 de 21 de mayo de 1927). Un año más tarde, el 11 de septiembre de 1928, se firmó la Convención de Mozambique. Aunque era algo menos favorable a Portugal que el convenio de 1909 en cuanto al comercio entre Mozambique y Sudáfrica, incluía sin embargo la cláusula de "nación más favorecida" y varias concesiones recíprocas respecto de una lista de productos que eran más ventajosas para los exportadores de Mozambique que las condiciones ofrecidas anteriormente por Sudáfrica.

11. La Convención de 1928 sentó las bases de las futuras relaciones económicas entre ambos países. En la parte I de la Convención se fijaba el número máximo de africanos de Mozambique que se emplearían en las minas de Transvaal, se estipulaban las condiciones de trabajo y se disponía que la contratación, la asignación y la repatriación de los trabajadores se encomendarían a una organización aprobada por ambos Gobiernos. La parte II versaba sobre el transporte por ferrocarril y los precios, y garantizaba el paso a través de Lourenço Marques de una proporción fija de las mercancías transportadas por mar que se importaran a una zona concreta del Transvaal. La parte III se refería a las aduanas y al intercambio comercial.

12. Otros acuerdos ulteriores se limitaban en su mayor parte a modificar ciertos detalles de esta Convención. Por ejemplo, el número máximo de trabajadores que se podía contratar, fijado en 80.000 en 1928, se elevó a 100.000 en 1940, cuando el Gobierno de Sudáfrica convino en exportar 340.000 cajas de frutos cítricos todos los años a través de Lourenço Marques. Del mismo modo, la proporción garantizada de importaciones marítimas a la "zona competidora" del Transvaal (véase el párrafo 23) que debían pasar por Lourenço Marques pasó del 50% en 1928 a su nivel actual del 40%.

13. En las secciones siguientes se dan detalles de la Convención y los acuerdos conexos.

C. Suministro de mano de obra a Sudáfrica

14. La contratación de trabajadores en Mozambique para las minas de oro y de carbón del Transvaal empezó en 1896, bajo los auspicios de la Cámara Minera del Transvaal. En 1897 se promulgaron por primera vez en Mozambique disposiciones para limitar la emigración de trabajadores, a las que siguieron otras leyes y otros acuerdos que culminaron en la firma del convenio del 1° de abril de 1909 mencionado antes. En 1913 (Orden 757, de 27 de mayo), la contratación se limitó a la zona situada al sur del paralelo 22° S, es decir al sur del río Save. De 1928 a 1965, año en que se firmó un nuevo convenio (véase más adelante), la contratación de mano de obra se rigió por la parte I de la Convención de Mozambique, cuyas disposiciones no se modificaron prácticamente durante ese período. A partir de 1903, toda la contratación de trabajadores de las minas procedentes de Mozambique fue monopolio de la Asociación de Mano de Obra Indígena de Witwatersrand (*Witwatersrand Native Labour Association*) (WNLA), asociación en forma de cooperativa de las minas del Transvaal establecida en 1901 con objeto de eliminar la competencia entre las distintas minas para obtener mano de obra. La asociación se considera a sí misma como organización benéfica que, además de contratar a los trabajadores, se ocupa en tramitar los contratos, organizar los exámenes médicos y el transporte, y se encarga de los salarios y de las remuneraciones retenidas.

15. En efecto, la Convención de 1928 disponía que los africanos sólo podían trasladarse legalmente de Mozambique a Sudáfrica para trabajar en las minas del Transvaal y únicamente por contrato con la WNLA, ajustado a las condiciones prescritas. La Convención, en su forma original, limitaba el número de los que se podían emplear en esas condiciones a 80.000^a, cifra que se elevó a 90.000 en 1936 y a 100.000 en 1940 (véase el párrafo 12). Los contratos se extendían por un período inicial de doce meses, con posible prórroga por seis meses más, y después el trabajador había de residir en Mozambique durante un período no inferior a seis meses antes que se le pudiera contratar de nuevo. Los africanos de Mozambique que trabajaran en Sudáfrica sin contrato de la WNLA, así como los que se quedaran en el país después de terminado el contrato, habían de ser devueltos a Mozambique como inmigrantes clandestinos. Sólo en circunstancias muy especiales se podía dar pasaporte a mujeres africanas para viajar a Sudáfrica y se habían de repatriar inmediatamente las que se encontrasen en el territorio de Sudáfrica sin pasaporte válido.

16. De la contratación en Mozambique se encargaban unos representantes pagados por la WNLA con licencia de las autoridades de Mozambique. Los trabajadores contratados se sometían a examen médico y tenían asegurado el transporte gratuito al lugar de trabajo. Una vez terminado el contrato, la organización encargada de la contratación los repatriaba a la frontera de Mozambique, el importe del viaje de vuelta era deducido de antemano del salario del interesado. La organización podía asignar a los trabajadores cualquiera de las minas para las que contrataba mano de obra, con la limitación de que el Gobierno de Mozambique podría, en determinadas circunstancias, prohibir la contratación para una mina que no cumplierse los requisitos previstos en la Convención. De no haber disposición en contrario, los trabajadores contratados estaban sujetos a las leyes de Sudáfrica, que incluían sanciones penales por ruptura de contrato.

17. La Convención establecía también la Oficina del Cuidador de los indígenas portugueses en Johannesburgo, cuyos funcionarios, de Mozambique (más adelante representantes del

^a En determinadas circunstancias, el Gobierno de Mozambique podía autorizar la emigración de africanos para trabajar en las minas sin intervención de la WNLA.

^d En 1928 el número de trabajadores de las minas era de 106.000. La Convención disponía una reducción progresiva de esa cifra a 80.000 a lo largo de un período de cinco años. El acuerdo de 1934, si bien mantenía la cifra máxima de 80.000, garantizaba por otra parte un mínimo de 65.000 trabajadores.

Instituto del Trabajo de Mozambique), tenían a su cargo, entre otras cosas, la inscripción de los trabajadores contratados, la expedición de pasaportes, la inspección de las condiciones de trabajo en las minas y los alojamientos, la vigilancia de los intereses y el bienestar de los trabajadores y, en general, el desempeño, respecto de ellos, de las funciones de un funcionario consular. Los empleadores habían de pagar el derecho de inscripción y una cantidad mensual al Curador por cada trabajador contratado. El importe del pasaporte, asimismo pagadero al Curador, se deducía del salario del trabajador.

18. Una característica de la Convención de 1928 era la disposición de que, pasados los nueve primeros meses del contrato, la mitad del salario de los trabajadores se retenía y se les pagaba al regresar a Mozambique. Ese dinero se pagaba a las autoridades de Mozambique (primero en oro y después en moneda sudafricana) por conducto del Curador, y junto con las remesas voluntarias, los derechos de registro y otros derechos, representaba una parte importante de los ingresos de divisas de Mozambique.

19. El acuerdo de 13 de octubre de 1964, que sustituyó a la parte I de la Convención, y que entró en vigor el 1° de enero de 1965, ampliaba la zona para la que se podía contratar mano de obra en Mozambique incluyendo las minas de oro y de carbón del Estado Libre de Orange así como las del Transvaal, y disponía que el número de trabajadores de Mozambique que se emplearía en las minas se convendría de mutuo acuerdo entre ambos Gobiernos. Se suprimió la Oficina del Curador y asumieron sus funciones el Cónsul General de Portugal y el delegado del Instituto del Trabajo de Mozambique en Johannesburgo, con ayuda de personal portugués asignado a todas las zonas donde había trabajadores de Mozambique. Además de las funciones anteriormente desempeñadas por el Curador, se encomendaba al delegado que actuara como asesor de los trabajadores en las causas civiles, si así lo solicitaban. El nuevo acuerdo contiene disposiciones más detalladas respecto de la contratación y las condiciones de trabajo. Concretamente, en los contratos, que han de estar escritos en la lengua vernácula y en portugués, se deberá indicar con

claridad el lugar del empleo, la naturaleza del trabajo, el salario mínimo garantizado y otras condiciones; y habrá de verificar esos contratos un agente del Instituto del Trabajo en el centro de contratación. También se especifica en el acuerdo que, independientemente de las disposiciones del contrato, los trabajadores no recibirán un trato menos favorable que los trabajadores sudafricanos.

20. Las disposiciones de la Convención de Mozambique relativas al suministro de mano de obra a las minas de Sudafrica han sido objeto de amplias críticas, y se ha alegado que constituyen un trueque de trabajadores africanos a cambio de concesiones económicas y que son una forma de trabajo forzoso. Las quejas fueron examinadas por el Comité Especial del Trabajo Forzoso en 1953^e y una comisión de encuesta de la OIT en 1961-1962^f. En los informes de ambos órganos se hace referencia a tales acusaciones.

21. En 1963, último año para el que se dispone de datos, se comunicó que había 151.933 trabajadores migrantes de Mozambique inscritos en el registro del Curador de Johannesburgo, de los cuales 80.469 estaban empleados en las minas de oro y carbón de Witwatersrand. La diferencia entre estas cifras responde a que, a pesar de las disposiciones de la Convención, gran número de africanos de Mozambique entró clandestinamente en Sudafrica en busca de trabajo. Aunque después de 1928 se hicieron esporádicamente esfuerzos para repatriarlos como inmigrantes clandestinos, se decidió más tarde permitirles que trabajaran por contrato en las minas y en las zonas rurales, siempre que se inscribieran en el registro del Curador y cumplieran las demás condiciones. En el cuadro siguiente se indica el número de trabajadores migrantes registrados el 31 de diciembre de los años respectivos:

^e E/2815/Add.5.

^f Oficina Internacional del Trabajo, *Informe de la Comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la queja presentada por el Gobierno de Ghana relativa a la observancia por el Gobierno de Portugal del Convenio (No. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957*, Ginebra, 1962.

TRABAJADORES DE MOZAMBIQUE INSCRITOS EN EL REGISTRO DEL CURADOR EN EL TRANSVAAL

Año	Número total registrado	Nuevos trabajadores contratados por la WNLA	Contratos renovados	Trabajadores clandestinos ^a
1963	151.933	74.011	17.285	95.207
1962	166.144	83.867	17.632	64.645
1961	178.539	96.074	19.743	62.722
1960	173.976	89.243	21.298	63.435
1959	175.064	93.451	26.484	66.967

Fuente: Mozambique, *Anuário Estatístico*, 1959-1963.

^a Incluye únicamente los inmigrantes clandestinos conocidos de las autoridades. Aproximadamente la mitad están empleados por contrato fuera de las minas.

22. El tesoro público de Mozambique recibe por los trabajadores migrantes contratados diversos pagos anuales en concepto de derechos de pasaporte, de inscripción en el registro, y de emigración y de otros impuestos. Además, obtiene ingresos de divisas por las remesas voluntarias de los emigrantes y por el aplazamiento forzoso del pago de los salarios. En el cuadro siguiente se indica el importe de los impuestos, derechos y otros ingresos oficiales, y de las transferencias de sueldos y salarios recibidos por los trabajadores en Sudafrica:

PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES MIGRANTES REGISTRADOS EN EL TRANSVAAL (En millones de escudos)

Año	Impuestos, derechos, etc.	Salarios			
		Total	Pago aplazado	Remesas	Pagados en Sudafrica
1963	34,6	130,6	108,4	3,3	18,9
1962	57,6	137,1	107,1	3,1	26,9
1961	56,7	130,4	101,3	3,2	25,9
1960	58,6	143,5	114,9	5,7	22,9
1959	57,2	119,3	105,7	1,6	12,0

Fuente: Mozambique, *Anuário Estatístico*, 1959-1963.

D. Relaciones comerciales con Sudáfrica

Comercio de tránsito

23. Mozambique obtiene sus mayores ventajas económicas de la parte II de la Convención que lleva su nombre. Aunque Lourenço Marques es para el Transvaal la salida más natural al mar, tiene que hacer frente a la competencia de los puertos y ferrocarriles de Sudáfrica, pero en la parte II de aquella Convención se le garantiza un porcentaje del tonelaje total de las importaciones comerciales marítimas al interior de lo que se ha llamado "zona competidora"*, es decir, el corazón industrial del Transvaal. En 1928, el porcentaje garantizado oscilaba entre el 50% y el 55%, pero luego se redujo al 47,5% (en 1934) y al 40% (en 1964). En caso de que el porcentaje real importado a través de Lourenço Marques y del ferrocarril de esta ciudad no llegase al mínimo garantizado, el Gobierno de Sudáfrica está comprometido a compensar la pérdida de ingresos ferroviarios según una fórmula convenida. Esto no ha ocurrido sino en tres años desde 1928.

24. Como corolario de ese acuerdo, la Convención dispone que: a) Mozambique no puede aplicar a mercaderías en tránsito tarifas tributarias superiores a los derechos que se pagarían en Sudáfrica, y b) los derechos y gastos de puertos

* Se define como "zona competidora" la limitada por una línea que une a Pretoria Springs con Vereeniging, Klerksdorp, Verveldiend, Krugersdorp y Pretoria.

Puerto de entrada	1963 (toneladas)	1962 (toneladas)	1961 (toneladas)
Lourenço Marques	596.139	579.132	627.438
Durban	502.032	461.256	487.922
East London	60.210	60.024	65.293
Port Elizabeth	70.116	70.116	68.490
Ciudad de El Cabo	7.574	5.484	5.732
TOTAL	1.380.012	1.216.788	1.228.209
Porcentaje que pasó por Lourenço Marques	43,19	51,08	51,08

Fuente: Mozambique, Direcção dos Serviços dos Portos, Caminhos de Ferro e Transportes, *Relatório*, 1963, pág. 40.

27. En años recientes las importaciones efectuadas con arreglo a la Convención de Mozambique constituyeron sólo una pequeña parte del tráfico total de tránsito de Sudáfrica que atraviesa Lourenço Marques. En 1963, por ejemplo, fue de sólo dos tercios del tráfico de entrada, y un sexto del tránsito total en ambos sentidos.

28. El comercio total de tránsito de Sudáfrica que atraviesa Lourenço Marques subió desde 2.800.000 toneladas en 1955 (tránsito directo e indirecto) a 3.700.000 toneladas en 1963. Casi tres cuartas partes de éstas (2.700.000 toneladas) se componían de exportaciones, principalmente minerales de base, carbón, maíz, azúcar, frutos frescos (cítricos, sobre todo), productos metálicos semitratados y productos químicos. Las exportaciones de minerales de base dieron un total de 1.225.415 toneladas en 1963^b, o sea, casi la mitad del tonelaje exportado, y constaban sobre todo de lo siguiente: cromo (756.648 toneladas); manganeso (109.945 toneladas); vermiculita (84.745 toneladas); mineral de hierro (73.402 toneladas) y asbesto (61.347 toneladas). El total de exportaciones de carbón fue de 320.248 toneladas; de maíz, 219.791 toneladas^c; de azúcar, 35.000 toneladas, y de frutas, 30.209 toneladas; casi todas estas últimas se destinaban a Rotterdam y Trieste.

^b Datos obtenidos de estadísticas del tráfico ferroviario.

^c Calculadas deduciendo las importaciones de Mozambique del volumen total transportado por vía férrea.

y fondeadores han de aplicarse en la misma forma y, a menos de convenirse otra cosa, no han de ser más altos que los correspondientes a puertos de Sudáfrica. Por último, las tarifas de transporte ferroviario entre Lourenço Marques y la "zona competidora" son algo menores que para otros puertos (Durban, por ejemplo) y se calculan a base de trayecto completo, dividiéndose los ingresos entre ambos ferrocarriles con arreglo a una proporción convenida. Un convenio de trabajo entre las dos administraciones ferroviarias dispone el uso conjunto del material rodante y del personal.

25. El tráfico de tránsito (importaciones) a la "zona competidora" fue, por término medio, algo superior a 383.000 toneladas durante los años 1932-1945, y 654.000 toneladas de 1946 a 1963, lo que representa un promedio de 52,3% del total de las importaciones marítimas a la zona durante todo ese tiempo. Obsérvese, sin embargo, que la garantía concierne al tonelaje, y no al valor o importe. En efecto, buena proporción de las importaciones consiste en mercaderías de poco valor, para las que los inconvenientes de un largo acarreo se compensan con el menor costo del transporte por vía férrea. Desde 1934, la proporción de las importaciones muy valiosas disminuyó gradualmente; en 1963, sólo el 2,4% de las mercancías incursas en la clase 1 de la tarifa (es decir, las que pagan el tipo máximo de flete) importadas a la "zona competidora" pasaron por Lourenço Marques.

26. El cuadro siguiente indica el tonelaje de importaciones marítimas comerciales a la "zona competidora", por puertos de entrada principales:

29. Las importaciones de Sudáfrica por el ferrocarril de Lourenço Marques ascendieron a 998.539 toneladas en 1963 y consistieron predominantemente en gasolina y otros productos del petróleo, así como material ferroviario. En el cuadro 4 figuran, por productos, los datos del tráfico de tránsito.

30. No se dispone de datos separados relativos a las ganancias obtenidas por la Administración de Ferrocarriles y Puertos con este tráfico de tránsito. Obsérvese, no obstante, que los ingresos de la línea férrea entre Lourenço Marques y Ressano García, que lleva todo el tráfico de tránsito de Sudáfrica (el 90% del flete total), pasaron de 211.000.000 de escudos en 1963, sin contar los ingresos portuarios de Lourenço Marques.

Comercio entre Mozambique y Sudáfrica

31. La parte III de la Convención de 1928 previó el trato recíproco de "nación más favorecida" en el comercio entre Mozambique y Sudáfrica, con sujeción a ciertas reservas. Además de la reserva habitual relativa a derechos "antidumping" para proteger a la industria nacional frente a la competencia desleal, se establecieron excepciones respecto de a) tarifas especiales o rebajas concedidas por Sudáfrica a productos del Reino Unido, sus Dominios, colonias o posesiones o en virtud de convenios aduaneros y otros acuerdos con Territorios vecinos bajo administración británica, y b) privile-

gios aduaneros concedidos por Mozambique a productos de Portugal y de Territorios bajo administración portuguesa. Además, se exonera de derechos aduaneros a ciertas mercancías, que en el caso de las producidas en Sudáfrica e importadas por Mozambique, son las siguientes: carbón, legumbres, frutas, pescado y productos lácteos. Para el caso de productos de Mozambique importados en Sudáfrica, se trata de aceites vegetales, maderas, sisal, copra y frutas. Esta última cláusula se suprimió de la Convención en 1934 y fue reemplazada con un compromiso, de parte de los dos Gobiernos, de no impedir el comercio mutuo entre ambos. El acuerdo de 13 de octubre de 1964 no alteró gran cosa la situación existente, pues se limita a disponer ciertas medidas para fomentar el comercio de plátanos, maíz, traviesas de ferrocarril y gas butano fabricado en Mozambique.

32. Aunque Sudáfrica no cede sino a Portugal en importancia del comercio con Mozambique, el volumen comercial sigue siendo muy reducido; representa menos del 12% del comercio exterior de Mozambique. Como puede verse en el cuadro 1, la balanza favorece mucho a Sudáfrica, de la que Mozambique obtiene ciertos productos esenciales, sobre todo para la zona de Lourenço Marques, principal centro urbano e industrial de Mozambique. Entre aquellos productos esenciales figuran las semimanufacturas de hierro y acero, incluso recipientes, por valor de 69 millones de escudos en 1964; carbón, valorado en 36 millones de escudos, y productos alimenticios, entre ellos el maíz (46 millones) y las legumbres frescas (14 millones). El carbón se importa de Sudáfrica en razón del alto costo que supone enviarlo a Lourenço Marques desde las minas de Moatize, en el distrito de Tete. Las compras de Sudáfrica en Mozambique consisten sobre todo en productos del petróleo procedentes de la refinería SONAREP de Lourenço Marques, que comenzó a producir en 1962 (90 millones de escudos en 1964), productos de la madera, especialmente entibamientos para pozos mineros y traviesas de ferrocarril (107 millones de escudos), y aceites vegetales (13 millones de escudos). Las exportaciones de plátanos y frutas cítricas de Mozambique, véndanse o no a Sudáfrica, se comercializan en consignación por las respectivas organizaciones de mercado sudafricanas. Cabe notar que el valor de las exportaciones de Mozambique a Sudáfrica aumentará probablemente, aparte de otras razones, como resultado de la expansión de la producción por la refinería SONAREP, que ha emprendido un programa de inversiones de 130 millones de escudos encaminado a aumentar su capacidad total a 800.000 toneladas de petróleo crudo. En junio de 1965 se comunicó que la compañía estaba creando una red de establecimientos de ventas al detalle en Sudáfrica.

33. En el cuadro 2 *infra* se indica el importe del intercambio de mercaderías entre Sudáfrica y Mozambique.

E. Inversiones de Sudáfrica en Mozambique

34. Quizá por el estímulo que entraña la política sudafricana de estrechar los lazos económicos con sus vecinos inmediatos, estos últimos años han registrado un perceptible aumento del capital de inversión de Sudáfrica en Mozambique.

35. El acuerdo económico concertado entre Portugal y Sudáfrica el 13 de octubre de 1964¹ prevé a) el suministro, por Sudáfrica a Portugal, de información económica de posible interés para fines de planificación en los territorios portugueses; b) la tramitación con benevolencia, por las autoridades sudafricanas, de toda solicitud de inversión de capitales y de cualesquier arreglos de financiación; y c) la consideración especial de toda solicitud de financiación sudafricana para la construcción de carreteras y empresas de interés particular para el Gobierno portugués en Mozambique y Angola.

36. Ya en 1963 se había anunciado que la Anglo-American Corporation of South Africa, por conducto de una sucursal recién formada — la Mozambique Development Corporation,

con activo de 2 millones de rand — había adquirido el capital de acciones de la única empresa pesquera importante de Mozambique, la Industrias de Peixe Nossa Senhora de Fatima (INOS). Esta empresa, que tenía un capital de 3.400.000 escudos, explotaba una pequeña fábrica en Inhassoro especializada en la pesca y comercialización del camarón. Los planes de la Anglo-American consisten en desarrollar la pesca comercial en gran escala para la exportación, pero de momento la compañía sigue dedicada al estudio científico de los recursos del litoral y aún no ha comenzado ninguna explotación importante. En mayo de 1966 la compañía fue autorizada a posponer sus planes primitivos de establecer una fábrica de harina de pescado en Porto Amélia, y a reducir la capacidad eventual de la factoría desde 30.000 toneladas anuales a 5.000.

37. En 1964, la Anglo-American Corporation, por conducto de otra sucursal, obtuvo una concesión de terreno de 100.000 hectáreas en el valle del bajo Zambeze, cerca de Quelimane, para destinarla a la producción de azúcar. El proyecto entraña una inversión de capital del orden de 500 millones de escudos, y es financiado conjuntamente por la Anglo-American Corporation e intereses australianos. El plan prevé que la mitad de la concesión la explote la compañía y la otra mitad se asigne a los colonos, cada uno de los cuales recibirá 100 hectáreas. La Anglo-American ha anunciado que su objetivo a largo plazo es producir anualmente 1 millón de toneladas de caña de azúcar. La Anglo-American Corporation interviene también, junto con la Tiger Oats and National Milling Co., Ltd. of South Africa, en la creación de una planta de elaboración de anacardo en João Belo, distrito de Gaza. Esta compañía, en la que la Anglo-American tiene interés mayoritario, se creó en agosto de 1965 con un capital inicial de 20 millones de escudos, que puede aumentarse a 85 millones. La compañía (descrita en detalle en el párrafo 130 del estudio de las industrias agrícolas y de transformación en Mozambique) llegará a tratar 30.000 toneladas de anacardo crudo anualmente.

38. Aparte de estas inversiones, se comunica que la Anglo-American ha iniciado la prospección de unos yacimientos de diamantes, para la que en 1964 se otorgó una extensa concesión en el sector de Pafuri, cerca de la frontera con Rhodesia del Sur (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo I, párrs. 284 a 290). Además, participa financieramente en la construcción de instalaciones de carga y almacenaje de exportaciones de azúcar en el puerto de Lourenço Marques, cuyo costo se calcula en 66 millones de escudos.

39. La Industrial Development Corporation of South Africa es otra empresa de Sudáfrica con inversiones recientes en Mozambique y se dice que hizo un préstamo de capital a la Marracuene Agrícola Agucareira, formada en 1963 y en potencia la mayor productora de azúcar mozambiqueña de propiedad portuguesa. Esta compañía (descrita en el apéndice III *supra*, párrs. 86 a 88) prevé una inversión futura de 430 millones de escudos, procedentes en su mayor parte de fuentes portuguesas, y una capacidad definitiva de producción de 60.000 toneladas de azúcar anuales.

40. En noviembre de 1965, la South African Central Mining and Finance Corporation se unió a tres bancos portugueses (Banco de Angola, Banco Comercial de Angola y Banco Nacional Ultramarino) para fundar el Bank of Lisbon and South Africa, Ltd., con oficinas en Johannesburgo y un capital inicial de 2.000 millones de rand. El propósito de este banco — en el que la General Mining and Finance Corporation tiene el 25% de interés con opción de aumentar su participación — consiste en favorecer relaciones económicas más estrechas entre Sudáfrica, Mozambique y Angola.

41. Los periódicos se han referido últimamente a la posibilidad de que se disponga de capital sudafricano para la explotación de la cuenca del río Zambeze, el proyecto de desarrollo con fines múltiples más importantes de Mozambique, que afecta a una superficie de 34.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y cuyo costo calculado es de 5.350 millones de escudos (*ibid.*, anexo II, párrs. 293 a 295). También se ha hablado del asentamiento de agricultores sudafricanos

¹ Republic of South Africa Treaty Series, No. 8, 1964.

en la región de Angónia (distrito de Tete), en terrenos cedidos por las autoridades de Mozambique.

II. RELACIONES ECONÓMICAS DE MOZAMBIQUE CON RHODESIA DEL SUR

A. Generalidades

42. Basta una ojeada al mapa del Africa meridional para ver la vital importancia económica de Mozambique para Rhodesia del Sur. La ubicación geográfica de aquella la convierte en salida natural de la mayor parte del comercio exterior de Rhodesia del Sur, pues las únicas otras rutas son el ferrocarril que va a Ciudad de El Cabo y Durban pasando por Bechuanía — puertos casi cuatro veces más distantes de Salisbury por ferrocarril que Beira, y más o menos el doble que Lourenço Marques — y el de Lobito, que, además de lo distante, pasa por Zambia y actualmente está cerrado al comercio de Rhodesia.

43. La salida tradicional de Rhodesia del Sur y de los otros dos miembros de la antigua Federación de Rhodesia y Nyasalandia es Beira, situada a sólo 602 kilómetros de Salisbury. El puerto y el ferrocarril de Beira estuvieron controlados por intereses británicos hasta 1948-1949, época en que fueron expropiados por Portugal; el ferrocarril y el Rhodesian Railways tenían una administración mixta. En 1955 Portugal construyó una línea ferroviaria hasta Lourenço Marques para atender el volumen del comercio de tránsito, que crecía rápidamente. Mediante acuerdos especiales se exonera de derechos a las mercaderías en tránsito y los fletes fijados por la conferencia de armadores se ajustan para compensar la larga distancia entre Beira y los puertos europeos.

44. Aunque este comercio de tránsito es vital para Rhodesia del Sur mal podría menospreciarse su importancia para Mozambique. En 1963 las mercaderías en tránsito procedentes de la Federación constituyeron el 49% en volumen y el 78% en valor, del total de mercaderías en tránsito por los puertos de Mozambique. Por consiguiente, fueron la contribución principal a los ingresos invisibles en divisas procedentes del comercio en tránsito, que a su vez constituía aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de divisas obtenidas.

45. También proporcionó al Territorio más de la mitad de los ingresos ferroviarios y portuarios, que ascendieron en 1965 a 1.009 millones de escudos, y es una importante fuente de actividad comercial tanto para Beira como para Lourenço Marques. Aunque no se dispone de estadísticas indicadoras de la proporción de este comercio que corresponde a Rhodesia del Sur, cabe señalar que en virtud de una antigua convención sólo un pequeño porcentaje del comercio exterior de Rhodesia del Sur, valorado en más de 200 millones de libras esterlinas en 1965, se transportó por Sudáfrica.

46. Aparte de este importante comercio de tránsito, Mozambique está tradicionalmente vinculada a Rhodesia del Sur como asociada comercial y como fuente de mano de obra migrante. Hasta el decenio de 1960, cerca del 20% de los africanos empleados en Rhodesia del Sur procedían de Mozambique, algunos bajo contrato, como los trabajadores de las minas de Transvaal. Aunque su número ha disminuido mucho en los últimos años, todavía hay más de 100.000 trabajadores migrantes de Mozambique a Rhodesia del Sur, ocupados principalmente en granjas y en el centro industrial de Umtali, a proximidad de la frontera de Mozambique. El comercio directo entre los dos Territorios nunca ha sido muy grande, y sólo fue del 2,4% del valor del comercio visible exterior de Mozambique en 1964, pero si se excluye el comercio con la zona del escudo, se comprobará que se aproxima al 5% del comercio de Mozambique con países ajenos a Portugal. Otros lazos económicos lo constituyen el oleoducto entre la refinería de Feruka y Beira, que cuenta con intereses del Gobierno de Portugal (véase *infra*) y las disposiciones que rigen el suministro de energía eléctrica a Umtali por la Sociedade Hidroeléctrica do Revuê, empresa de propiedad principalmente gubernamental. Al prorrogarse recientemente la vigencia del acuerdo de 1967 a 1971, se declaró que los ingresos previstos para Mozambique ascenderían a 120 millo-

nes de escudos en esos cuatro años. Por último, en 1964 se presentó al órgano legislativo de Rhodesia del Sur una propuesta de que ésta participase en el plan para la explotación global de la cuenca del río Zambeze valorado en 5.350 millones de escudos, que Portugal estudiaba desde 1957 y cuyas obras se iniciaron en abril de 1966. El proyecto entraña la construcción de una gran presa en Cahora Bassa gracias a la cual se abrirá al cultivo una superficie de 34.000 kilómetros cuadrados aproximadamente destinada a la colonización (véase A/6000/Rev.1, cap. V, anexo II, párrs. 293 a 295). A Rhodesia del Sur le convendría sobre todo en la posibilidad de mejorar la navegación en el río Zambeze, pero hasta la fecha no se ha tenido noticia de ningún acuerdo o negociación oficial sobre la participación de Rhodesia del Sur.

47. La cooperación económica entre los dos Territorios cobró un fuerte impulso con la situación política que precedió y siguió a la declaración unilateral de independencia por el régimen de Rhodesia del Sur. La influencia política ya era evidente en febrero de 1964, cuando se firmó un acuerdo comercial entre Portugal y Rhodesia del Sur en virtud del cual las dos partes convinieron en conceder a la otra el trato de "nación más favorecida" respecto de las mercaderías en las que comerciaban Rhodesia del Sur por una parte y Mozambique y Angola por la otra, y en exonerar completamente de derechos de importación a determinadas mercaderías. Este acuerdo, destinado a aumentar el comercio entre las dos partes, se acompañó de unas deliberaciones sobre las posibilidades de aumentar la cooperación económica entre ambos Territorios. Refiriéndose a esas deliberaciones, realizadas en Salisbury en diciembre de 1964, un portavoz de Rhodesia del Sur declaró que habían sido cordiales y habían facilitado un acuerdo total, además de preparar el terreno para nuevas negociaciones. Se expresó la intención de convocar una conferencia para examinar en detalle las principales esferas de actividad en las que ambos países podían beneficiarse compartiendo servicios y experiencia técnicos.

48. Desde entonces se han organizado varias conferencias bilaterales en materia económica entre los dos Gobiernos. Así, en febrero de 1965, una misión, descrita como comercial y técnica y constituida por representantes portugueses de Lisboa, Mozambique y Angola, celebró en Salisbury una conferencia de diez días para estudiar la cooperación respecto de transportes, uso en común de ríos, agricultura, problemas de veterinaria, y turismo. A ello siguieron varias visitas de funcionarios, incluso la del Gobernador General de Mozambique a Salisbury en agosto de 1965.

49. En el transcurso de 1965 se propuso en Salisbury la formación de una alianza económica entre Mozambique, Angola, Sudáfrica y Rhodesia del Sur, según una sugerencia presentada inicialmente por el Sr. Verwoerd. El Ministro de Agricultura, Economía y Comercialización de Sudáfrica formuló por primera vez la propuesta en Salisbury, en junio de 1965, cuando en una declaración instó a que se crease "una comunidad económica perdurable en aquella parte del Africa meridional". La propuesta fue comentada en artículos de periódico y por varios personajes destacados de la vida pública. Sin embargo, aunque los periódicos portugueses la apoyaron, las autoridades de Portugal se abstuvieron de todo comentario oficial, y sólo se refirieron al "sincero deseo de Portugal de mantener las mejores relaciones posibles con sus vecinos" de Africa.

50. Después de aprobada la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad de 20 de noviembre de 1965 hubo acusaciones de que el ferrocarril de Lourenço Marques se había utilizado para transportar productos de petróleo de Sudáfrica a Rhodesia del Sur. Aunque ha negado oficialmente esta acusación, el Gobierno de Portugal dejó claramente sentada su posición de que no impondría sanciones contra Rhodesia del Sur ni "entorpecería el transporte privado con destino a países sin litoral o procedente de éstos". La misma posición fue adoptada respecto del transporte de petróleo por el oleoducto Beira-Umtali. El Gobierno de Portugal ha calificado su posición en varias oportunidades de "postura neutral", y ha subrayado que no adoptaría medidas de excepción para ayudar

al Gobierno de Rhodesia del Sur pero tampoco pondría obstáculo al intercambio económico normal.

51. Pese a ello, la negativa de otros Estados de mantener relaciones económicas con el régimen de Rhodesia del Sur ha afectado considerablemente el comercio de tránsito por los puertos de Mozambique. El efecto más importante ha sido la interrupción del comercio de tránsito de Zambia, en especial las importaciones de cobre, que en 1964 señalaron una media de más de 62.000 toneladas mensuales. (En julio de 1966 se informó que se había llegado a un acuerdo para el transporte de 12.000 toneladas mensuales a Beira por Malawi, y, según una noticia periodística ulterior, Zambia había reanudado la exportación de cantidades limitadas por Rhodesia del Sur). En junio de 1966 la prensa informó asimismo que durante los meses precedentes el volumen de tabaco — producto de exportación más valioso de Rhodesia del Sur — transportado vía Beira había sido un 80% menor de lo normal.

52. Las secciones siguientes contienen mayores detalles sobre las relaciones económicas de Mozambique con Rhodesia del Sur, según los datos de que se dispone.

B. Relaciones comerciales con Rhodesia del Sur

Comercio de tránsito

53. El hecho de que Rhodesia del Sur dependa de Beira para su principal salida al mar tiene su origen en la Convención del Africa Oriental de 1891, que estipulaba la construcción de un ferrocarril por Portugal, desde la bahía de Púnguè hasta la frontera de la actual Rhodesia del Sur. Terminado en 1896, el ferrocarril de Beira, así como el puerto de Beira y el empalme a Beira eran hasta 1948 y 1949 propiedad de empresas británicas en las que la antigua British South Africa Company tenía la mayoría de las acciones y que también se encargaban de su explotación. En 1948 Portugal expropió el puerto y en 1949 adquirió el ferrocarril de Beira por 4 millones de libras esterlinas.

54. Hasta 1949 el ferrocarril de Beira fue administrado conjuntamente con el Rhodesian Railways. Después de la

expropiación, los Gobiernos del Reino Unido y de Portugal llegaron a un acuerdo (Convención de Beira de 17 de junio de 1950) que preveía entre otras cosas i) la fijación y el mantenimiento de tarifas ferroviarias preferenciales en favor de Beira con respecto de los puertos de Sudáfrica, ii) la exoneración de derechos de tránsito para las mercaderías importadas o exportadas por lo que en ese entonces era Rhodesia del Norte y del Sur y Nyasalandia, iii) la concertación de un acuerdo de explotación entre los dos ferrocarriles, y iv) la creación de una zona franca en el puerto de Beira. Este acuerdo, que está en vigor hasta 1970, en realidad sólo mantiene la situación que reinaba cuando el puerto y el ferrocarril estaban bajo administración británica; es más, desde 1920 Mozambique no imponía los derechos de tránsito, limitados al 3% *ad valorem* en virtud de la Convención de 1891.

55. Además, con las tarifas preferenciales de flete entre Beira y los puertos europeos se compensa considerablemente la correspondiente gran distancia. Hasta septiembre de 1965 las tarifas de flete desde el Reino Unido a Beira eran en realidad más bajas que las que regían para Lobito, pese a que la distancia era mucho mayor (3.000 millas). Precisamente a esas tarifas preferenciales obedecía el hecho de que casi la totalidad del comercio ultramarino de Zambia y parte del de Katanga (que se elevaban a 195.803 toneladas, por un valor de 1.600.000 escudos en 1963) se asignara al Rhodesian Railways y a los ferrocarriles y puertos de Mozambique.

56. En 1955 el volumen del comercio de tránsito por Beira adquirió tales proporciones que, a fin de evitar la sobrecapacidad del puerto, se construyó otra salida ferroviaria desde Bannockburn en Rhodesia del Sur hasta la línea de Lourenço Marques, en Gujá. En 1964 se construyó otro ramal dentro de Rhodesia del Sur para facilitar la exportación del azúcar producido en el valle de Hippo y de la zona del "Triangle" de Rhodesia del Sur por Lourenço Marques.

57. El volumen y el valor del comercio de tránsito (directo e indirecto) de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia a través de Mozambique, en comparación con el de Sudáfrica, pueden verse en el cuadro que figura a continuación.

COMERCIO DE TRÁNSITO POR LOS PUERTOS DE MOZAMBIQUE
POR VOLUMEN Y VALOR

Año	Sudáfrica		Federación de Rhodesia y Nyasalandia	
	(En toneladas)	(En miles de escudos)	(En toneladas)	(En miles de escudos)
1963	3.227.025	4.557.024	3.116.189	23.491.008
1962	3.424.376	4.095.585	3.302.329	22.896.171
1961	3.240.001	3.889.347	3.042.049	23.085.711
1960	3.756.197	3.907.754	2.766.677	22.025.628
1959	3.125.887	3.917.539	2.678.363	20.312.381

58. Del cuadro anterior, que no incluye el comercio de tránsito de la República Democrática del Congo por Beira vía el Rhodesian Railways (véase más arriba), se desprende que aunque el volumen del comercio de la Federación era aproximadamente igual al de Sudáfrica, su valor era casi cinco veces mayor. Puesto que por las mercaderías más costosas se suelen pagar fletes más caros, resulta evidente la importancia de estas cifras. Cabe señalar que en 1962, el último año respecto del cual se dispone de la información pertinente, de las 2.700.000 toneladas de carga transportada por el ferrocarril de Beira, 2 millones correspondieron al tráfico hacia la Federación o desde allí, y que del total de los ingresos procedentes de la explotación del ferrocarril, o sea 332 millones de escudos, 319 millones procedían del tráfico de tránsito. La proporción es mayor aún respecto del ramal de Limpopo del ferrocarril de Lourenço Marques que en 1962 obtuvo ingresos por 293 millones de escudos, de los que 283 millones procedían del tráfico de tránsito. En 1963 se

informó que después de sólo ocho años de existencia, los ingresos del ramal de Limpopo entre Gujá y la frontera, una distancia de 320 kilómetros, habían bastado para cubrir el costo de construcción, es decir 800 millones de escudos, y dejado un superávit de 300 millones de escudos como ganancia.

59. A falta de estadística para los años siguientes a 1963 resulta difícil determinar la proporción del comercio de tránsito que se puede atribuir a Rhodesia del Sur, y es imposible obtener información apreciable respecto de los hechos recientes. Sin embargo, el comercio exterior de Rhodesia del Sur en 1964 se evaluó en 247 millones de libras esterlinas, de las que 7 millones correspondieron a exportaciones de oro y 84 millones al comercio con los países vecinos. Suponiendo que no más de una cuarta parte de las mercancías que van al exterior pasaran por puertos sudafricanos, se puede calcular que el valor del comercio de tránsito de Rhodesia

del Sur por Mozambique fue de unos 117 millones de libras, o sea 9.360 millones de escudos. El comercio ultramarino de Malawi, la casi totalidad del cual pasa en tránsito por Mozambique, se valoró en 16.900.000 libras, o sea 1.352 millones de escudos. Es más difícil calcular la proporción del comercio de Zambia que pasó por Mozambique en 1964, pero se puede indicar que el volumen de las exportaciones de cobre de Zambia, transportadas principalmente vía Beira, fue de 681.700 toneladas, valoradas en 148.400.000 libras, o sea 11.872 millones de escudos.

60. Además del comercio de tránsito al exterior por los puertos de Beira y Lourenço Marques, cabe mencionar también que gran parte del comercio de Rhodesia del Sur con Malawi se transporta por los ferrocarriles de Beira y Trans-Zambezia. El valor de este comercio entre los dos países, excluidas las reexportaciones, fue de 7.200.000 libras en 1964, o sea 576 millones de escudos.

61. Entre 1960 y 1965 el volumen de carga vía los puertos de Lourenço Marques y Beira aumentó casi en un 48,8%, en tanto que en 1964 y 1965 el total correspondiente a todos los puertos de Mozambique aumentó en un 18,4%; únicamente el tonelaje que pasó por Beira fue de 511.537 toneladas en agosto de 1965, o sea mayor que nunca. Este rápido y sorprendente aumento, que obedecía sobre todo al tráfico de tránsito, llevó al Gobierno de Portugal a gastar grandes sumas en obras de servicios portuarios y ferroviarios, incluso 140 millones de escudos en el puerto de Beira en 1965 (véase cap. V *supra*, párr. 162). Más de la quinta parte de los gastos realizados con arreglo al *Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967* (1.771 millones de escudos) se destinó al sector del transporte.

62. El efecto de la declaración unilateral de independencia por el régimen de Rhodesia del Sur y las medidas adoptadas por otros países en virtud de la resolución 217 (1965) del Consejo de Seguridad ha sido una disminución apreciable de este comercio de tránsito, como se indica en el párrafo 51 de este trabajo.

El oleoducto Beira-Umtali

63. La construcción de un oleoducto desde el puerto de Beira hasta la única refinería de Rhodesia del Sur, situada en Feruka (Umtali), es un hecho importante que afecta al comercio de tránsito. Gracias a la gran atención suscitada por el oleoducto en los últimos meses, sus detalles son bien conocidos de todos; por consiguiente sólo se tratarán brevemente.

64. Inaugurado el 21 de diciembre de 1964, el oleoducto cubre una distancia de 184 millas, 169 de ellas en Mozambique; es propiedad de la Companhia do Pipeline Moçambique-Rodésia, registrada con arreglo a la ley de Portugal y subsidiaria indirecta de la Lonhro Ltd.; tiene un capital autorizado de 10 millones de escudos (62,5% británico y 37,5% portugués). El oleoducto costó cerca de 4 millones de libras; lo construyó, por contrata, la Hume Pipe Company (South Africa) Ltd. en sociedad con la Costain and Press (Overseas Services) Ltd. y la Morris-Knudson of Africa Ltd. El principal contratista hizo anticipos para la mayoría de los costos de construcción, que deberán reembolsarse en un plazo de seis años contándose desde septiembre de 1965. La capacidad inicial del oleoducto era de 600.000 toneladas métricas de petróleo crudo, mas se proyecta aumentarla a 835.000 toneladas métricas para 1970.

65. Según el correspondiente contrato (Decreto 44.769, de 5 de diciembre de 1962), la compañía es propietaria y explota el oleoducto mediante una concesión de 25 años, renovable por dos periodos adicionales de 25 años cada uno, después de los cuales el oleoducto y todas las concesiones se convierten en propiedad del Gobierno de Portugal. Sin embargo, este Gobierno puede expropiarlo después de transcurridos quince años, a condición de que dé aviso a la compañía con doce meses de antelación y pague una indemnización. La compañía está exceptuada del pago de impuestos durante los primeros diez años de funcionamiento y tiene la garantía

del Gobierno de que durante los primeros veinticinco años no se podrá construir ningún oleoducto desde Beira a Feruka que le haga competencia. El contrato estipula asimismo que la compañía indemnizará al ferrocarril de Beira por la pérdida de ingresos correspondientes a su explotación.

66. Aunque el capital es principalmente británico, en conformidad con la ley de Portugal cinco de los nueve miembros de la junta directiva son portugueses, uno de ellos designado oficialmente por el Gobierno de Portugal. En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Reino Unido y otros Estados Miembros para hacer cesar el suministro de petróleo a Rhodesia del Sur después de la declaración unilateral de la independencia del régimen ilegal de ese Territorio, la minoría de los directores propuso la suspensión de las operaciones; sin embargo, la mayoría portuguesa alegó que como su Gobierno no era parte en el embargo, deberían mantenerse relaciones comerciales normales.

67. Según se ha informado en el capítulo III, el suministro de petróleo al oleoducto está suspendido desde diciembre de 1965. El Gobierno del Reino Unido ha pagado a la compañía desde mayo de 1966 una suma mensual de 54.000 libras, parte de la cual recibe el Gobierno de Mozambique en compensación por los ingresos perdidos.

Comercio entre Mozambique y Rhodesia del Sur

68. No se dispone de estadísticas separadas sobre el comercio entre Mozambique y Rhodesia del Sur para los años 1954 a 1963, en que Rhodesia del Sur formaba parte de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Como puede verse en el cuadro 3, la modalidad del comercio entre ambos países ha cambiado considerablemente desde 1950, en que el valor total de su comercio fue de sólo 44.400.000 escudos. Para 1964 había aumentado a 180.900.000 escudos y, aunque aún representaba sólo el 2,4% del comercio exterior total de Mozambique, Rhodesia del Sur únicamente cedía en importancia a Sudáfrica, entre los países africanos que comerciaban con Mozambique. Como puede verse, la balanza comercial era considerablemente favorable a Mozambique, cuyos principales rubros de exportación eran la madera de construcción y los productos de madera (417.705 libras), la electricidad suministrada a Umtali (293.928 libras) por la central hidroeléctrica de Revuê, y productos alimenticios para el ganado (240.014 libras). Las importaciones provenientes de Rhodesia del Sur consistían principalmente en tabaco (105.984 libras) y diversos productos manufacturados.

69. Durante 1964 el comercio entre ambos Territorios continuó rigiéndose por un acuerdo comercial concertado entre la Federación y Portugal en 1958. Sin embargo, el 24 de febrero de 1964 los Gobiernos de Rhodesia del Sur y Portugal concertaron un nuevo acuerdo, que entró en vigor el 1° de abril de 1965, destinado a aumentar el comercio entre sus respectivos territorios. Como su antecesor, el acuerdo prevé el trato de "nación más favorecida", sujeto a ciertas excepciones: i) que los productos de Rhodesia del Sur no gozarán del trato preferencial especial concedido por Mozambique a las mercaderías producidas en los Territorios portugueses o, en virtud de cualquier acuerdo especial, a las mercaderías producidas en España o el Brasil; ii) que los productos portugueses no gozarán del trato preferencial concedido por Rhodesia del Sur a ciertos países dentro de la estructura del GATT; y iii) que ninguna de las partes tendrá derecho a gozar de privilegios concedidos por la otra en virtud de acuerdo alguno que constituya una unión aduanera o una zona de libre comercio. Además, se estipuló recíprocamente la admisión libre de derechos de una amplia variedad de productos, incluso ganado en pie, pescado y productos vegetales. Sin embargo, lo que es más importante, en el acuerdo se dispuso el establecimiento de un comité conjunto de enlace comercial y económico, encargado de examinar los medios de aumentar el comercio entre Rhodesia del Sur, por una parte, y Portugal y los Territorios bajo administración portuguesa, por la otra.

70. Resulta aún prematuro determinar qué efectos habrá de tener esta nueva cooperación. Aunque el volumen del co-

mercio no aumentó, salvo durante algunos meses de 1965, a la firma del acuerdo siguieron renovados contactos entre funcionarios de los dos Gobiernos, e indudablemente se ha puesto de manifiesto en Salisbury un interés en una cooperación más estrecha. Según informes de periódicos recientes pero no confirmados, la reexportación de productos provenientes de Rhodesia del Sur por Mozambique ha conocido un incremento, pero, dada su novedad, aún no se puede confirmar ni desmentir el hecho con datos estadísticos oficiales.

C. Mano de obra migrante

71. Aunque no está tan estrictamente reglamentada ni tan bien documentada como en el caso de Sudáfrica, la emigración de trabajadores africanos de Mozambique a Rhodesia del Sur ha ido aumentando desde hace varios años. Entre 1946 y 1958 — año en que las autoridades de Rhodesia empezaron a restringir la emigración — los trabajadores de Mozambique constituían el grupo más grande de inmigrantes y representaban, según las estadísticas de Rhodesia, el 20% de la fuerza total del trabajo. Con arreglo a las estadísticas de Mozambique, que se basan en el número de trabajadores migrantes registrados en la delegación del Instituto del Trabajo de Mozambique en Salisbury, el número de trabajadores migrantes en Rhodesia del Sur alcanzó la cifra máxima de 218.577 a fines de 1959*. Al mes de diciembre de 1963, este número había disminuido a 119.871, o sea alrededor de 30.000 personas menos que las registradas en el Transvaal.

72. Esos trabajadores son, en su mayoría, emigrantes clandestinos procedentes sobre todo de los distritos de Tete y Manica e Sofala, que legalizan su situación obteniendo pasaporte portugués y registrándose en la mencionada delegación en Salisbury, después de entrar al país y obtener trabajo. Sólo una pequeña proporción, 6.387 en 1963, trabaja en las minas; la mayor parte se ocupa en agricultura, industrias y servicios privados. Como casi todos son emigrantes clandestinos, las sumas que entran a Mozambique por concepto de derechos de pasaporte y divisas extranjeras (que resultan de pagos diferidos) son muy inferiores a las que recibe en virtud de los trabajadores contratados para el Transvaal.

73. Hasta 1961, existían dos medios organizados para la entrada de trabajadores en Rhodesia del Sur, aparte del movimiento totalmente ilícito y espontáneo a través de la frontera: el empleo por contrato en los centros de contratación de Mozambique, y un servicio de transporte gratuito proporcionado por el Rhodesian Migrant Labour Service (conocido como ULERE). Esta última ofrecía gratuitamente a los trabajadores y sus familias transporte con comida y alojamiento desde la frontera hasta Wankie y Umtali, donde se los inscribía y se les permitía seguir viaje hasta los empleadores que eligiesen. Después de cumplir un año de empleo por lo menos, tenían derecho a transporte de regreso gratuito. En 1956, un total de 78.279 emigrantes de Mozambique y Zambia eligieron los servicios de ULERE y sólo 18.000 fueron contratados en el país de origen.

74. De esos dos medios organizados, el de la contratación en Mozambique es el único que las autoridades de Mozambique no consideran técnicamente como "clandestino". Este procedimiento se reglamentó por sucesivos acuerdos entre los Gobiernos, de 1913 a 1961. En virtud de estos acuerdos, conocidos colectivamente como el Acuerdo de Tete¹, cuyos términos eran similares a la Parte I de la Convención de Mozambique, el Gobierno de Mozambique autorizó la contrata-

ción de 15.000 trabajadores como máximo en el distrito de Tete, sin restricción en cuanto al tipo o duración del empleo. La contratación, realizada en centros fijos para tal fin, estaba a cargo de representantes autorizados de organizaciones de empleo aprobadas. Cada contrato se sometía a la aprobación de un funcionario del Instituto del Trabajo de Mozambique. Corrían por cuenta de la organización contratante el pago de los derechos (una libra) de pasaporte del trabajador, y el suministro de transporte hasta el lugar de empleo y desde allí. El Acuerdo preveía el establecimiento de una Oficina del Curador de los indígenas portugueses en Salisbury con funciones similares a las de la de Johannesburgo. Debía pagarse al Curador, que también actuaba como agente para las remesas y la transferencia de pagos diferidos, una suma equivalente a la totalidad del impuesto (una libra anual) cobrado a los indígenas de Mozambique en Salisbury y la mitad del impuesto cobrado a los trabajadores en otras partes².

75. Desde 1948 la contratación está a cargo de dos organizaciones: la Rhodesian Native Supply Commission, organismo oficial creado en 1946 (Ley No. 36 de 1946), y la Agricultural Native Labour Limited, organismo de servicios similares a la WNLA que fue autorizado en 1948.

76. Sin embargo, se contrataron en realidad muy pocos trabajadores mediante este procedimiento, y el promedio anual durante el decenio de 1950 no alcanzó a 4.000 para la Rhodesian Native Supply Commission ni a 400 para la Agricultural Native Labour Limited. Un grupo algo mayor hizo uso de los servicios proporcionados por ULERE pero, aparentemente, fue aún mayor el número de los migrantes clandestinos que viajaron por sus propios medios.

77. En 1958 las autoridades de Rhodesia del Sur empezaron a restringir la inmigración de trabajadores extranjeros. En virtud de la *Foreign Migratory Labour Act*, de 1958, se dotó de facultades al Ministro de Trabajo, Bienestar Social y Vivienda para que pudiera, cuando le constara que la existencia de mano de obra local en una zona excedía a la demanda, declarar cerrada esa zona para los inmigrantes que buscasen empleo. En marzo de 1959 Salisbury y Bulawayo fueron declaradas zonas cerradas y en los meses siguientes la ley se aplicó a otras zonas urbanas hasta que, a fines de 1959, Umtali, donde la mitad de los trabajadores africanos procedía de Mozambique, era el único municipio abierto a trabajadores inmigrantes. Según se informó estas medidas tuvieron por consecuencia una disminución del 34% en la cantidad de inmigrantes llegados a Rhodesia del Sur desde fuera de la Federación. En 1960 cesó el servicio de transporte gratuito proporcionado por ULERE y en 1961 dejó de tener vigencia el Acuerdo de Tete, de cuya terminación habían notificado las autoridades de Rhodesia del Sur en julio de 1960. Para desalentar aún más a la inmigración, por la *Employment Tax Act* de 1961 se impuso una tasa de una libra esterlina mensual pagadera por los empleadores por cada trabajador extranjero. Pero esta ley fue derogada un año después de entrar en vigor.

78. Uno de los efectos de esta medida fue reducir los ingresos, que no eran muy cuantiosos, obtenidos por Mozambique en concepto de derechos de pasaporte e impuestos de los trabajadores migrantes. De un total de 6.500.000 escudos en 1957, estos ingresos bajaron a 269.400 escudos en 1963 y procedieron exclusivamente de derechos de pasaportes.

79. Al mismo tiempo disminuyó considerablemente el número de trabajadores de Mozambique registrados en Rhodesia del Sur, como puede verse en el cuadro siguiente. Por supuesto, quizás la reducción se haya debido en parte a que el número de emigrantes clandestinos que se declararon oriundos de Mozambique fue menor.

* Las cifras publicadas por la Southern Rhodesia Labour Bureau y el Instituto del Trabajo de Mozambique discrepan considerablemente. Así, según las estadísticas de Rhodesia en 1951 había 101.618 migrantes, en tanto que la cifra registrada en la delegación del Instituto del Trabajo en Salisbury era de 148.935.

¹ En particular, los acuerdos del 31 de julio de 1925 y del 19 de octubre de 1934 (Rhodesia del Sur: *Government Notices*, 340 de 1925 y 620 de 1934).

² En el acuerdo de 1925 se disponía que si el total de derechos e impuestos pagados al Curador no llegaba a 4.500 libras anuales, el Gobierno de Rhodesia del Sur tenía que pagar la diferencia. Esta disposición se eliminó del acuerdo de 1934.

TRABAJADORES DE MOZAMBIQUE REGISTRADOS EN RHODESIA DEL SUR

	Registrados			Nuevo registro	
	Total	Minería	Otras ocupaciones	Contratados en Mozambique	Otros
1963	119.871	6.387	113.484	—	5.142
1962	202.863	6.873	195.990	—	12.379
1961	199.191	8.532	190.659	—	9.984
1960	193.578	1.787	191.791	402	44.404
1959	218.577	2.876	215.701	751	33.998

Fuente: Mozambique, *Anuário Estatístico*, 1959-1963.

CUADRO 1

MOZAMBIQUE: COMERCIO ESPECIAL CON LOS PAÍSES VECINOS (POR VALOR Y PORCENTAJE)

A. Importaciones

Año	Sudáfrica		Rhodesia del Sur ^a		Zambia ^a		Malawi ^a		Congo (Leopoldville)	
	Miles de escudos	% del total	Miles de escudos	% del total	Miles de escudos	% del total	Miles de escudos	% del total	Miles de escudos	% del total
1950	230.625	13,1	18.935	1,1	99	0	1.824	0,1	2	0
1960	439.281	12,0	—	—
1961	399.666	10,7	—	—
1962	481.241	12,3	—	—
1963	492.325	12,1	—	—
1964	571.203	12,7	77.035	1,7	309	0	24.170	0,6	—	—
1965 ^b	414.062	10,4	75.362	1,9	1.528	0	2.028	0	—	—

B. Exportaciones

1950	222.120	18,2	25.479	2,1	29	0	12.455	1,0	1.014	0,1
1960	61.614	2,9	—	—
1961	93.772	3,7	1.145	0
1962	230.672	8,8	7.612	0,3
1963	303.961	10,5	2.598	0,1
1964	324.351	10,7	103.820	3,4	32.697	1,1	8.224	0,3	—	—
1965 ^b	281.904	11,2	78.361	3,1	14.251	0,6	11.561	0,4	1.499	0,1

C. Balanza

Año	Sudáfrica		Rhodesia del Sur ^a		Zambia ^a		Malawi ^a		Congo (Leopoldville)	
	Miles de escudos		Miles de escudos		Miles de escudos		Miles de escudos		Miles de escudos	
1950	—	8.505	+	6.544	—	70	+	10.631	+	1.012
1960	—	377.667	—	—
1961	—	305.894	+	1.145
1962	—	250.569	+	7.612
1963	—	188.364	+	2.598
1964	—	246.852	+	26.785	+	32.388	—	15.946	—	—
1965 ^b ...	—	132.158	+	2.999	+	12.723	+	9.533	+	1.499

Año	Importaciones		Exportaciones		Balanza
	Miles de escudos	% de las importaciones totales	Miles de escudos	% de las exportaciones totales	
1960	69.496	1,9	80.470	3,8	+10.974
1961	77.149	2,1	121.436	4,8	+44.287
1962	136.401	3,5	135.702	5,2	— 699
1963	92.469	2,3	115.062	4,0	+22.593

Fuentes: Mozambique, *Comércio Exteno* y *Boletim Mensal*.

^a Malawi, Rhodesia y Zambia constituían la Federación de Rhodesia y Nyasalandia de 1954 a 1963. El comercio entre Mozambique y la Federación de Rhodesia y Nyasalandia en el período 1960-1963 fue el siguiente:

^b Solamente desde enero hasta octubre inclusive.

CUADRO 2

MOZAMBIQUE: VALOR DEL COMERCIO ESPECIAL CON SUDÁFRICA POR
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Millones de escudos)

	1950	1960	1961	1962	1963	1964	1965 ^a
A. IMPORTACIONES							
Hierro y acero ^b	6,9	64,7	64,5	87,8	94,5	69,4	48,8
Carbón	23,5	27,5	29,9	33,0	31,3	36,5	34,6
Maíz	—	—	0,1	12,7	30,2	45,9	33,0
Legumbres frescas	10,1	6,9	12,7	21,0	20,0	14,0	15,5
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc.	1,3	7,9	6,8	9,6	11,3	9,8	10,1
Productos lácteos ^c	3,1	12,7	16,2	19,3	9,8	10,9	9,8
Lubricantes	0,4	18,3	21,7	20,3	15,7	11,0	7,3
Maquinaria y herramientas para la agricultura	1,0	5,6	3,0	3,0	4,1	4,0	5,6
Pescado ^d	1,4	3,5	3,8	4,5	4,8	6,3	4,5
Productos medicinales	1,4	2,8	2,4	3,1	3,5	3,5	3,8
Telas de algodón	4,6	8,9	3,3	4,0	4,1	3,8	1,1
Piezas de vehículos ^e	5,2	8,0	3,5	8,2	8,0	4,2	3,7
Frutas	5,2	12,6	11,8	14,4	14,2
B. EXPORTACIONES							
Bananas	1,7	4,0	8,8	15,1	15,6	...	9,0
Té	6,0	2,1	1,4	0,9	0,7	2,9	9,3
Aceite de copra	12,6	9,3	7,6	13,9	14,3	24,2	13,2
Anacardos sin cáscara	—	5,8	4,9	5,5	5,9	7,6	10,0
Gasolina	—	—	—	66,7	75,6	60,1	54,6
Gasoil y Diesel oil	—	—	—	53,3	60,7	30,4	46,5
Madera de construcción ^f	20,9	13,7	38,5	54,9	87,4	118,1	107,5
Sisal	2,1	5,3	7,7	4,7	13,6	30,1	12,8

Fuentes: Mozambique, *Comércio Externo*, 1950 y 1960-1963; *Boletim Mensal*, 1964 y 1965.

^a Desde enero hasta octubre inclusive.

^b Incluso lingotes, perfiles, láminas, alambre y caños, y recipientes de hierro y acero.

^c Incluso leche, manteca y queso.

^d Incluso pescado fresco y en conserva.

^e Piezas de automóviles, motocicletas y bicicletas, etc.

^f Incluso madera aserrada, durmientes de vías férreas y madera para pisos.

CUADRO 3

MOZAMBIQUE: VALOR DEL COMERCIO ESPECIAL CON RHODESIA DEL SUR
POR PRINCIPALES PRODUCTOS
(Miles de escudos)

A. IMPORTACIONES								
Año	Maíz	Carbón	Cobre	Hierro ^a	Tractores	Piezas de vehículos ^b	Abonos	
1950	—	4.416	9	124	5	41	510	
1964	2.130	3.075	4.205	1.623	5.481	1.854	2.337	
1965 ^c	14.245	3.168	3.830	3.731	1.867	1.326	1.088	
B. EXPORTACIONES								
Año	Madera de construcción ^a	Bagazo de semilla de algodón	Gasolina	Aceite de copra	Bananas	Gas-oil y diesel oil	Aceite de semilla de algodón	Aceite de mani
1950	2.483	—	—	—	893	—	—	113
1964 ^c	33.261	18.315	8.121	8.735	...	9.125	...	—
1965 ^d	20.174	10.022	2.421	5.143	5.095	2.006	9.805	5.610

Fuentes: Mozambique, *Comércio Externo* y *Boletim Mensal*.

^a Incluso lingotes, perfiles, láminas, alambre y tubos de hierro y acero; envases; y suministros para ferrocarril.

^b Piezas de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.

^c Enero hasta octubre inclusive.

^d Incluso madera aserrada, durmientes de vías férreas y madera para pisos.

CUADRO 4

COMERCIO DE TRÁNSITO DE SUDÁFRICA VÍA MOZAMBIQUE
POR PRINCIPALES PRODUCTOS^aA. *Hacia el exterior*

Producto (toneladas métricas)	1959	1960	1961	1962	1963
Metales comunes	513.201	1.207.966	1.071.608	1.032.009	763.139
Carbón	488.009	413.816	440.665	592.598	448.561
Maíz	—	10	30.484	227.702	294.688
Asbesto	90.490	98.049	108.165	106.398	108.793
Frutas frescas y en conserva y jugos de frutas..	32.415	44.196	37.642	38.188	43.125
Madera de construcción y productos de madera....	12.776	12.222	8.785	25.072	67.832
Hierro o acero sin trabajar o trabajado	2.366	3.374	27.297	13.166	80.650
Productos químicos (inorgánicos)	14.906	34.919	19.656	14.028	21.111
Cobre sin trabajar	13.163	12.283	13.054	9.029	16.565
Otros	598.363	119.424	299.041	328.818	367.680
TOTAL hacia el exterior					
Toneladas métricas	1.765.689	2.026.259	2.056.397	2.387.008	2.212.144
Millones de escudos	1.727,2	1.816,3	1.906,5	2.173,8	2.675,7

B. *Hacia Sudáfrica*

Gasolina	410.837	414.432	424.377	381.603	342.890
Aceites combustibles	180.908	199.184	230.189	205.906	202.687
Petróleo	113.426	129.755	86.779	143.153	134.284
Madera de construcción y productos de madera....	83.187	80.685	73.992	59.004	74.099
Papel	31.828	41.299	29.605	13.801	14.229
Productos químicos	35.852	22.596	20.090	19.948	20.314
Aceites lubricantes	15.922	14.822	15.826	14.402	12.929
Maquinaria agrícola e industrial	8.496	4.430	5.262	5.042	4.757
Otros	544.621	279.574	340.681	238.354	247.120
TOTAL hacia Sudáfrica					
Toneladas métricas	1.425.077	1.186.777	1.226.801	1.081.213	1.053.309
Millones de escudos	2.409,4	2.295,7	2.164,0	2.079,7	2.028,2

Fuente: Mozambique, *Comércio Externo*, 1959-1963.^a Este cuadro incluye el comercio de tránsito directo e indirecto registrado en la fuente. Por dificultades técnicas no se hace distinción respecto de las reimportaciones o reexportaciones. Los datos se basan en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional sólo desde 1961.

CUADRO 5

COMERCIO DE TRÁNSITO DE LA FEDERACIÓN DE RHODESIA Y NYASALANDIA
VÍA MOZAMBIQUE POR PRINCIPALES PRODUCTOS^aA. *Hacia el exterior*

Producto (toneladas métricas)	1959	1960	1961	1962	1963
Metales básicos	626.491	671.312	504.373	624.265	636.024
Cobre sin elaborar	468.692	514.998	524.187	537.826	561.141
Maíz	106.976	32.078	240.898	389.887	99.829
Asbesto	93.818	113.051	123.821	106.314	124.767
Hierro o acero sin trabajar o trabajado	85.407	32.872	147.302	138.126	150.852
Tabaco	84.911	96.433	99.136	106.468	99.163
Copra y semillas oleaginosas	20.152	25.022	27.684	48.460	66.568
Té	11.530	12.415	14.969	14.405	13.699
Zinc sin trabajar	11.520	4.680	6.432	17.557	47.265
Azúcar	—	—	—	1.260	47.265

Producto (toneladas métricas)	1959	1960	1961	1962	1963
Cueros y pieles	8.688	6.666	8.651	8.609	8.421
Carne en conserva	3.873	2.959	4.547	6.782	7.448
Borra de algodón	2.806	4.629	3.140	2.695	4.162
Otros	135.794	147.576	190.354	214.937	156.731
TOTAL hacia el exterior					
Toneladas métricas	1.660.658	1.664.691	1.895.494	2.217.591	1.990.689
Millones de escudos	14.763,5	15.941,2	16.927,6	17.365,4	17.935,9
B. Hacia la Federación					
Gasolina	243.821	252.046	264.180	247.359	224.054
Abonos	164.903	181.709	206.098	176.704	157.689
Aceites combustibles	151.196	168.232	179.162	180.055	189.041
Petróleo	53.293	62.688	69.170	73.831	73.159
Madera de construcción y productos de madera ..	64.059	71.483	48.900	47.185	41.344
Azúcar	38.619	30.650	36.899	32.633	8.824
Papel	17.155	22.093	25.255	22.377	20.783
Aceites lubricantes	17.073	17.615	12.000	12.490	10.256
Otros	480.865	538.882	506.194	493.201	568.587
TOTAL hacia la Federación					
Toneladas métricas	1.230.984	1.345.398	1.347.858	1.285.835	1.293.737
Millones de escudos	6.135,8	6.888,5	6.907,1	6.210,1	6.140,8

Fuente: Mozambique, *Comércio Externo*, 1959-1963.

* Este cuadro incluye el comercio de tránsito directo e indirecto registrado en la fuente. Por dificultades técnicas no se hace distinción respecto de las reimportaciones o reexportaciones. Los datos se basan en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional sólo desde 1961.

CAPÍTULO VI*

ADEN

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1965 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. En sus reuniones de 1965, el Comité Especial examinó la cuestión de Adén. El Subcomité de Adén presentó dos informes al Comité Especial, uno en abril de 1965 y otro en septiembre de 1966 (A/6000/Rev.1¹, cap. VI, apéndices I y II). Después de examinar el primer informe, el 17 de mayo de 1965 el Comité Especial aprobó una resolución (*ibid.*, cap. VI, párr. 300) en la que, entre otras cosas, lamentaba que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se hubiera negado a aplicar la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1963, y las recomendaciones del Comité Especial, y observaba con profunda preocupación que la Potencia administradora todavía llevaba a cabo operaciones militares contra el pueblo del Territorio. En la resolución se reiteraban recomendaciones anteriores y se pedía al Gobierno del Reino Unido que convocara inmediatamente una conferencia de representantes de todos los sectores de la opinión pública en la totalidad del Te-

rritorio, a fin de decidir las medidas constitucionales necesarias para la celebración inmediata de elecciones generales basadas en el sufragio universal de los adultos y con pleno respeto de los derechos humanos fundamentales, a lo que seguiría la creación de órganos y de un gobierno representativos de todo el Territorio y la concesión inmediata de la independencia; se pedía al Secretario General que tomara las medidas necesarias para asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas antes de las elecciones y durante su celebración. También se señalaba a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación existente en el Territorio.

2. El 16 de septiembre el Comité Especial hizo suyas las conclusiones del segundo informe del Subcomité y decidió que éste debía seguir de cerca la cuestión de Adén en todo momento e informar al Comité cuando procediere.

3. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General examinó los informes del Comité Especial sobre la labor realizada en 1964 (A/5800/Rev.1², cap. VI) y en 1965 (A/6000/Rev.1 cap. VI) y aprobó la resolución 2023 (XX), de 5 de noviembre de 1965, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.4.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

² *Ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

“[La Asamblea General]

“1. Aprueba los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes al Territorio de Adén y respalda las conclusiones y recomendaciones del Subcomité de Adén;

“2. Hace suyas las resoluciones aprobadas por el Comité Especial el 9 de abril de 1964, el 11 de mayo de 1964 y el 17 de mayo de 1965;

“3. Deplora que la Potencia administradora se haya negado a aplicar las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial;

“4. Deplora también que la Potencia administradora haya intentado establecer un régimen no representativo en el Territorio, con miras a concederle la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General, y hace un llamamiento a todos los Estados para que no reconozcan independencia alguna que no se base en los deseos del pueblo del Territorio, libremente expresados en elecciones celebradas mediante el sufragio universal de los adultos;

“5. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y a liberarse del dominio colonial y reconoce la legitimidad de sus esfuerzos por lograr los derechos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

“6. Considera que el mantenimiento de las bases militares en el Territorio constituye un obstáculo importante que impide al pueblo del Territorio librarse de la dominación colonial y pone en peligro la paz y la seguridad de la región, y que es indispensable, por consiguiente, suprimir inmediata y completamente esas bases;

“7. Observa con profunda preocupación que la Potencia administradora sigue llevando a cabo operaciones militares contra el pueblo del Territorio;

“8. Encarece al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que proceda inmediatamente a:

“a) Poner fin al estado de excepción;

“b) Derogar todas las leyes que coartan las libertades públicas;

“c) Hacer cesar toda acción represiva contra el pueblo del Territorio y, en particular, las operaciones militares;

“d) Poner en libertad a todos los detenidos políticos y permitir que regresen las personas desterradas o a quienes se haya prohibido vivir en el Territorio por actividades políticas;

“9. Reafirma los párrafos 6 a 11 de la resolución 1949 (XVIII) y encarece a la Potencia administradora que los aplique inmediatamente;

“10. Pide encarecidamente a todos los Estados Miembros que presten toda la ayuda posible al pueblo del Territorio en sus esfuerzos por lograr la libertad y la independencia;

“11. Señala a la atención del Consejo de Seguridad la peligrosa situación que existe en la zona

como consecuencia de las acciones militares británicas contra el pueblo del Territorio;

“12. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a los organismos especializados y a las organizaciones internacionales de socorro que presten toda la ayuda posible a las personas que sufren las consecuencias de las operaciones militares en el Territorio;

“13. Pide al Secretario General que adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la aplicación de la presente resolución e informe al Comité Especial sobre el particular;

“14. Pide al Comité Especial que examine de nuevo la situación del Territorio e informe a la Asamblea al respecto en el vigésimo primer período de sesiones;

“15. Decide mantener este tema en su programa.”

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO³

Introducción

4. En informes anteriores del Comité Especial a la Asamblea General figura información relativa al Territorio (A/5800/Rev.1 y A/6000/Rev.1). A continuación se proporciona información complementaria sobre los acontecimientos políticos y constitucionales recientes y sobre las condiciones económicas y sociales y la situación de la enseñanza.

Acontecimientos políticos y constitucionales

Suspensión de la Constitución de Adén

5. El 25 de septiembre de 1965, el Gobierno del Reino Unido dictó una *Order-in-Council*⁴ por la que se suspendía la aplicación de las disposiciones de la Constitución de Adén relativas al Consejo de Ministros y al Consejo Legislativo. Dicha *Order* autorizaba al Alto Comisionado Británico a dictar leyes para Adén y establecía un Consejo asesor cuyos miembros serían nombrados por el Alto Comisionado; pero no afectaba a las Constituciones de la Federación de Arabia Meridional o de los otros Estados de Arabia Meridional.

6. Como consecuencia de la *Order*, el Gobierno presidido por el Sr. A. Q. Mackawee quedó disuelto. Al explicar las razones de su acción, el Gobierno del Reino Unido declaró que había sido impuesta por el rápido empeoramiento de las condiciones de seguridad en Adén. En una declaración hecha pública por el Alto Comisionado Británico en Adén se indicó que, aunque éste seguía siendo la fuente última de autoridad, dicha autoridad había sido ejercida por conducto del Consejo de Ministros y con el asesoramiento del mismo; y que en la mayoría de los casos el Alto Comisionado debía aceptar ese asesoramiento. Pero Adén seguía siendo una colonia británica, y si el Gobierno británico estimaba que los ministros usaban indebidamente de las atribuciones que se les había confiado, todavía tenía autoridad para retirárselas. El Alto Comisionado acusó a los ministros de Adén de realizar

³ Los datos que figuran en esta sección se han tomado de informes ya publicados y de la información correspondiente al año 1964 transmitida al Secretario General por el Reino Unido, el 31 de agosto de 1965, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.

⁴ *The Aden (Temporary Provisions) Order, 1965.*

una campaña de obstrucción, que había culminado en su franca aprobación, ante el Consejo Legislativo, del terrorismo como instrumento político. El Gobierno de Adén, añadió el Alto Comisionado, "ha manifestado su simpatía por la utilización de la bazuka, la bomba y la bala del asesino como método para decidir la situación constitucional futura de Arabia Meridional".

7. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, el Sr. Mackawee declaró ante la Cuarta Comisión que tanto él como sus ministros habían tropezado con la obstrucción del Alto Comisionado del Reino Unido desde el momento en que tomaron posesión de sus cargos. La declaración del Alto Comisionado que les atribuía responsabilidad por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en Adén, era equívoca, dado que la seguridad estaba comprendida en las responsabilidades del Alto Comisionado, quien tenía bajo su control a la policía y a las fuerzas armadas. Las nuevas normas de emergencia introducidas por el Alto Comisionado en junio de 1965 sólo habían conseguido empeorar la situación.

8. El 2 de octubre de 1965 el Aden Trades Union Congress organizó una huelga general para protestar contra la suspensión de la Constitución de Adén. El 2 y el 3 de octubre se produjeron tumultos, que fueron especialmente violentos en el distrito Crater de Adén. Se impuso un toque de queda y se llamaron tropas británicas para ayudar a restablecer el orden. Se dijo que durante los tumultos fueron detenidas más de 760 personas y se expulsó a unos 300 yemeníes. Entre los detenidos se encontraba el Sr. Muhammad Saleh Aulaqi, Secretario General del Aden Trades Union Congress, y otros siete dirigentes sindicales.

Propuestas constitucionales para Arabia Meridional

9. En septiembre de 1965 el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional solicitó los servicios de dos asesores británicos en asuntos constitucionales, Sir Ralph Hone y Sir Gawain Bell "para que estudiaran y recomendaran enmiendas adecuadas a la Constitución Federal, teniendo presente que la Constitución enmendada debía:

"A. Ser satisfactoria para toda Arabia Meridional;

"B. Como consecuencia de consultas celebradas con todos los intereses principales en Arabia Meridional, resultar lo más aceptable posible a dichos intereses y satisfacer sus aspiraciones;

"C. Asumir que ha cesado la soberanía británica sobre Adén."

10. El 28 de enero de 1966 se presentó el informe de los asesores en asuntos constitucionales al Presidente del Consejo Supremo de la Federación⁵.

11. En una nota de fecha 25 de febrero de 1966 (A/6274), el Representante Permanente del Reino Unido transmitió al Secretario General, en nombre del Gobierno de la Federación de Arabia Meridional, copias de una carta dirigida al Secretario General por el Sr. Mohamed Farid, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Arabia Meridional, y de una declaración del Consejo Supremo de la Federa-

ción relativa al informe de los asesores en asuntos constitucionales. El Gobierno Federal señalaba en su declaración que había accedido a la inmediata publicación del informe para que todos en Arabia Meridional pudieran conocer su contenido. Subrayaba que los cambios propuestos en el informe eran sólo sugerencias, y se reservaba su juicio sobre dicho informe hasta que hubiera sido estudiado a fondo.

12. El Representante del Reino Unido pidió, también en nombre del Gobierno de la Federación de Arabia Meridional, que se distribuyera el informe de los asesores en asuntos constitucionales a todas las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas. El informe fue distribuido el 9 de marzo de 1966.

Cambios en el Gobierno Federal

13. Se comunicó que el 14 de febrero de 1966 se amplió el Consejo Supremo de la Federación. Se nombraron dos nuevos ministros de Adén, con lo que la composición del Consejo aumentó de diez a doce miembros. Los nuevos ministros eran el Sr. Abdul Rahman Girgrah, que asumió el cargo de Ministro de Información y Orientación Nacional, y el Sr. Husain Ali Bayoomi, que pasó a ser el Ministro de Aviación Civil. Los dos ministros son Presidente y Secretario General del United National Party, respectivamente.

14. También se ha comunicado que el Alto Comisionado británico designó cinco nuevos miembros de Adén para el Consejo Federal (la Legislatura), entre los cuales se cuentan los dos ministros recién mencionados. Desde julio de 1965, cuando dimitieron los miembros de Adén en el Consejo Federal, sus puestos han permanecido vacantes. Con arreglo a la actual constitución, Adén tiene derecho a 24 puestos en el Consejo Federal.

Organizaciones nacionalistas

15. El 14 de enero de 1966 los señores Aly al-Salamy y Abdullah al-Asnag, dirigentes del National Front for the Liberation of Occupied South Yemen (OLOS) y de la Organization for the Liberation of the Occupied South, respectivamente, publicaron un comunicado afirmando que las dos organizaciones habían convenido en formar "una organización revolucionaria y nacional denominada Front for the Liberation of Occupied South Yemen" (FLOSY). La nueva organización proclamó su adhesión a las medidas recomendadas en la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General por considerar que constituían "la única base para poner fin a los sangrientos combates entre el pueblo y las autoridades imperialistas británicas", y prometió continuar la lucha contra el colonialismo británico hasta conseguir la victoria. Una declaración publicada por el Secretario General Adjunto de la Liga Árabe señalaba que la fusión respondía al llamamiento hecho por los reyes y Jefes de Estado y de Gobierno árabes a fin de que todas las fuerzas nacionales se combinaran en el sur para formar una organización eficaz única.

16. El Secretario General del FLOSY, Sr. A. Q. Mackawee, anunció el 4 de marzo que se establecería un consejo revolucionario: estaría compuesto por veinte miembros, ocho de los cuales serían "representantes de los frentes de batalla". Además, en los dos meses siguientes se constituiría un consejo nacional que re-

⁵ Federation of South Arabia, *Constitutional Proposals for South Arabia*, 1966.

presentaría a los combatientes por la libertad y a los sectores civiles de todas las zonas del sur. Se nombró un comité del consejo revolucionario para que redactase un plan de acción nacional.

17. En un memorando dirigido a la conferencia de Primeros Ministros árabes celebrada el 16 de marzo de 1966, el FLOSY declaró que las propuestas constitucionales que habían preparado los dos expertos del Reino Unido, si se aplicaban, afianzarían la dominación imperialista del Sur "después de disimular la lamentable situación de la región con una independencia formal". En ese memorando se decía, además, que "el FLOSY luchará contra toda concesión de la independencia a la región que no incluya el traspaso de la autoridad directamente al pueblo del Yemen meridional y la aplicación de todas las medidas mencionadas en la resolución que aprobaron las Naciones Unidas en noviembre último".

18. El Consejo Revolucionario del FLOSY se constituyó en marzo de 1966 y celebró su primera reunión en su sede en Taiz (Yemen) el 16 de abril de 1966. El Consejo Revolucionario decidió establecer cuatro comités: el primero para elaborar un plan de acción; el segundo para elaborar unos estatutos; el tercero para preparar las elecciones a un Consejo Nacional, y el cuarto para encargarse de asuntos militares. El Sr. A. Q. Mackawee declaró que el Frente quería un gobierno para todo el Yemen meridional con sus protectorados oriental y occidental y sus poblaciones, y que las zonas dispersas del sur pasaran a formar grandes provincias. Esto frustraría el plan imperialista de dividir el Yemen meridional. La constitución debería ser redactada por un consejo que representase a la población y no al Ministerio de Colonias británico.

19. Se anunció que a principios de abril de 1966 se había formado una nueva organización a raíz de una conferencia celebrada en Asmara (Etiopía) entre los dirigentes de la South Arabian League, varios políticos independientes y algunos miembros de la que antes era Organization for the Liberation of the Occupied South (OLOS). El grupo se llama Command of Nationalist Forces in South Arabia (CONFISA) y ha criticado la política del FLOSY y ha declarado que éste es "un impostor y no tiene carácter representativo". Se han enumerado como fines de la nueva organización los siguientes: unidad de Arabia Meridional, independencia, traspaso del poder al pueblo, reconocimiento y garantía de los derechos humanos, poder judicial independiente y elecciones generales bajo una vigilancia neutral. Ha pedido conversaciones directas entre el Reino Unido y los representantes de Arabia Meridional. También ha invitado a todas las fuerzas nacionalistas a redactar una constitución que recoja las aspiraciones de la población, y ha declarado que sólo una asamblea constituyente elegida antes de la independencia tiene derecho a ratificar la constitución.

20. Dos miembros del FLOSY han sido expulsados del Frente, los Sres. Ahmed A. Al-Fadhli y Jaabal bin Hussein al-Audhali, por haber entablado en Beirut conversaciones con Ministros del Gobierno de la Federación de Arabia Meridional. Esos dos miembros son hermanos, respectivamente, del Ministro de Justicia y del Ministro de Seguridad Interna. El Sr. Muhammed Ali Al-Gifri, Presidente de la South Arabian League, y otros dirigentes de CONFISA también se entrevistaron con los Ministros Federales en Beirut el 3 de

abril de 1966. La delegación de Ministros estaba compuesta por el sultán Saleh bin Husain al-Audhali, Ministro de Seguridad Interna; el sultán Nasser bin Abdullah al-Fadhli, Ministro de Justicia; el Sr. Abdul-Rahman Girgrah, Ministro de Educación e Información Nacional, y el Sr. Ahmed Abdul-Ilah al-Darwish, Ministro de Comercio. En una declaración publicada a raíz de las conversaciones, los Ministros manifestaron que habían tenido un cambio de opiniones con la otra parte "en un ambiente de entendimiento y comprensión del verdadero carácter de la etapa por la que pasa Arabia Meridional".

Incidentes en Adén y operaciones militares

21. La prensa ha continuado publicando informaciones sobre los incidentes y disturbios en Adén. El 1º de septiembre de 1965 fue asesinado Sir Arthur Charles, Presidente del Consejo Legislativo de Adén. El 11 de enero de 1966 fue muerto a tiros un funcionario político de la Oficina del Alto Comisionado británico, el Sr. Husain M. Al-Wazir. Otro miembro de la administración británica, el Sr. Robin H. Thorne, resultó herido el 17 de enero al explotarle en las manos un paquete recibido por correo. En febrero y marzo hubo varios incidentes de disparos y explosiones de granadas. Se informó que muchas personas habían sido detenidas para ser interrogadas por las autoridades de seguridad. Varias organizaciones, en especial ex Ministros del Gobierno de Adén, el Congreso de Graduados y la Asociación de Funcionarios Civiles de Arabia del Sur (véanse A/AC.109/PET.443 a 445) protestaron enérgicamente contra esos arrestos. El 21 de marzo se impuso un toque de queda en varias zonas de Adén porque se había disparado contra un funcionario público británico y herido a un soldado británico. Tres días más tarde se levantó el toque de queda.

22. También se ha dado cuenta de demostraciones y huelgas, especialmente en diciembre y enero, llevadas a cabo fundamentalmente por trabajadores de las compañías petrolíferas y de los establecimientos militares. Una de las huelgas fue para protestar contra el despido de ochenta y cinco trabajadores decidido por una compañía petrolífera al reducir su volumen de operaciones. El 27 de febrero hubo una huelga general en Adén en protesta contra el asesinato del presidente del Aden Trades Union Congress, Sr. Ali H. al-Qadhi. Se dice que la policía de Adén ofreció una recompensa de £1.000 por informaciones que permitieran condenar a la persona o personas responsables del asesinato. Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo se produjeron demostraciones estudiantiles antibritánicas; se informó que muchos participantes fueron detenidos.

23. El 14 de abril el Trades Union Congress organizó en Adén una huelga general de un día para protestar contra "la entrada de soldados británicos en una mezquita situada en los suburbios de Adén, la violación de la dignidad humana, los tormentos infligidos a los presos y la clausura de las escuelas de Adén". El Alto Comisionado del Reino Unido prometió investigar el incidente y declaró que las fuerzas británicas de seguridad tenían órdenes estrictas de guardar el máximo respeto por los santos lugares y costumbres islámicos.

24. Desde junio del año 1965 el Alto Comisionado británico en Adén ha decretado otras medidas extra-

ordinarias, entre las que se cuentan los registros y verificaciones en la carretera, el cierre con valladas de zonas y carreteras de acceso alrededor del barrio en que viven las familias de las fuerzas británicas y el suministro de armas pequeñas a los funcionarios del gobierno cuando así lo recomienda el Jefe de Policía. Se ha aumentado el número de guardias en determinados puntos clave, en las oficinas del Gobierno y en los cuarteles de las tropas británicas.

25. El Front for the Liberation of Occupied South Yemen ha continuado publicando comunicados sobre las operaciones militares en el territorio. Se dice que continúan las operaciones en las zonas de West Radfan, Yafei, Fadhli, Beihan, Lahej, Subbaihah, Dhala-Shu'aib, Eastern Haushabi y Audhali. Ha habido noticias sobre ataques armados a los campamentos militares, convoyes y patrullas militares británicos, explosiones de minas y otros varios actos de sabotaje.

Regreso de los desterrados

26. El 1º de marzo de 1966 el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional recomendó al Alto Comisionado británico que se levantara la orden que prohibía regresar a todas las personas que habían sido desterradas o deportadas por motivos políticos. El Alto Comisionado británico ha dejado ya sin efecto la orden que prohíbe regresar a Adén a determinados dirigentes políticos, incluso dirigentes de la South Arabian League y tres sultanes depuestos.

Otros acontecimientos

27. El 22 de febrero de 1966 el Gobierno del Reino Unido anunció en su Libro Blanco sobre el examen general de la política británica de defensa, que las tropas británicas se retirarían de la base de Adén tan pronto Arabia Meridional llegase a ser independiente, lo que ocurriría a más tardar en 1968.

28. Según informa la prensa, la decisión de cerrar la base de Adén fue comunicada al Gobierno Federal de Arabia Meridional por el Subsecretario de Colonias británico durante una visita al territorio realizada antes del anuncio público. Se dijo que algunos ministros del Gobierno Federal habían expresado ansiedad al enterarse de la decisión del Gobierno del Reino Unido de dar por terminadas las obligaciones derivadas de los tratados con la Federación cuando se cerrase la base y se retiraran las tropas británicas. Se envió una misión a Londres para tratar de conseguir ayuda británica para reforzar las fuerzas armadas de la Federación. Se dijo que el Subsecretario de Colonias había informado al Gobierno Federal de que el Reino Unido estaría dispuesto a continuar prestando ayuda económica a Arabia Meridional después de la independencia (véase párr. 48).

Situación económica

Agricultura

29. Gracias a la mejora del sistema de riego, en 1964 el total de superficie cultivada con algodón pasó de 51.000 a 68.000 acres (de 20.400 a 27.200 hectáreas). La cosecha total de borra de algodón, que en 1963 había sido de 37.700 pacas, se calculó en 1964 a 42.000 pacas; la producción de semilla de algodón ascendió a 16.000 toneladas, lo que representaba unas 5.000 tone-

ladas más que el año anterior. Las ventas totales de frutas, verduras y legumbres ascendieron casi a 755.000 libras esterlinas, o sea un aumento de casi 255.000 libras esterlinas con relación a 1963.

30. Los gastos realizados por el Gobierno para los servicios de agricultura, regadío y veterinaria de la Federación de Arabia Meridional ascendieron a 215.800 libras esterlinas, aproximadamente. Se iniciaron nuevas obras de regadío en Ahwar, Nisab y Beihan, y se estaban introduciendo mejoras en Abyan y Lahej. Los fondos a disposición del Agricultural Loans Board aumentaron en 120.000 libras esterlinas, o sea hasta un total de 165.000 libras.

Comercio

31. En 1963 el valor de los bienes importados a través del puerto de Adén pasó de 86.113.692 libras esterlinas a 96.980.000, en tanto que el valor de las exportaciones y reexportaciones ascendió de 68.770.480 libras esterlinas a 69.660.000. El valor del comercio de tránsito en cueros, pieles, tabaco, resinas, cereales, café, textiles y algodón ascendió a 15.758.464 libras esterlinas; en 1962 había sido de 16.530.000 libras esterlinas. En 1964 el valor de los productos petroleros representó más del 40% del valor de los productos de importación, y con el aprovisionamiento de barcos, más del 75% del valor de los productos de exportación. El valor total del comercio realizado en Adén aumentó en más del 15% con relación al año anterior.

Hacienda pública

32. En abril de 1965 se introdujo en la Federación de Arabia Meridional una nueva moneda, el dinar. El dinar equivale a una libra esterlina y está dividido en 1.000 *fijs*. La nueva moneda, convertible en libras esterlinas a un tipo fijo de cambio, es emitida por la South Arabian Currency Authority. En virtud de las disposiciones de la *Federal Currency Law* de 1964, la South Arabian Currency Authority debe mantener una reserva de activo externo constituida por una cantidad en oro o libras esterlinas cuyo volumen no puede ser inferior al 75% del valor de los billetes y monedas en circulación y demás obligaciones a la vista de dicha Autoridad; esa reserva mínima sólo puede reducirse con la aprobación del Consejo Supremo de la Federación a recomendación unánime de la Junta de la *Authority*. Durante un período inicial tanto el chelín de África Oriental como el nuevo dinar de Arabia Meridional serán válidos en la Federación. El dinar se utilizará también en los Estados de Quaiti y Kathiri del Protectorado Oriental de Adén, que tendrá un representante en la *Currency Board*, así como en las Islas de Kamaran y Perim.

33. En 1964 los ingresos por concepto de derechos de aduana e impuestos indirectos ascendieron a casi dos millones de libras esterlinas. A esa suma se añadieron el impuesto sobre la renta que grava a los Ministros y funcionarios federales, los derechos por licencias y las multas, las contribuciones de los Estados Miembros y las subvenciones del Reino Unido. Desde el 1º de abril de 1964 hasta fin de febrero de 1965 los ingresos de la Federación ascendieron a 9.041.988 libras esterlinas, cifra que incluye una subvención del Reino Unido por valor de 5.499.000 libras esterlinas, 71.057 libras esterlinas de impuestos directos y 2.017.945 libras esterlinas de impuestos indirectos. Durante el mismo período los gastos ascendieron a 7.305.364 libras esterli-

nas, incluso 1.604.967 libras esterlinas para el ejército regular federal y 1.172.471 libras esterlinas para la Guardia Federal, 962.802 libras esterlinas para la enseñanza rural y urbana y 847.948 libras esterlinas para sanidad.

34. Los ingresos del Estado de Adén durante el período comprendido entre el 1° de abril de 1964 y el 28 de febrero de 1965 ascendieron a 3.355.966 libras es-

terlinas, 1.714.443 de las cuales provenían de los impuestos directos. Los gastos correspondientes al mismo período alcanzaron a 3.315.496 libras esterlinas, 750.000 de las cuales se asignaron al Plan de Desarrollo (véase párr. 43 *infra*).

35. Los ingresos y gastos de los demás Estados de la Federación para el año 1964-1965, incluyendo las subvenciones del Reino Unido, son los siguientes:

Estado ^a	Subvenciones y subsidios del Reino Unido (en libras esterlinas)		
	Total de ingresos		Gastos
Beihan (Emirato)	84.109	76.500	47.734
Alto Aulaqi (gobernado por el Jeque)	83.725	76.400	49.156
Audhali (Sultanía)	128.951	75.900	96.836
Dhala (Emirato)	102.616	76.000	61.160
Bajo Yafai (Sultanía)	135.610	72.000	111.493
Fadhli (Sultanía)	242.577	72.000	225.699
Abdali (Sultanía)	314.260	72.000	...
Aqrabi (gobernado por el Jeque)	15.235	4.000	12.047
Bajo Aulaqi (Sultanía)	114.425	62.200	49.265
Dathina (Estado)	104.476	75.800	54.446
Wahidi (Sultanía)	120.253	73.164	76.685
Shaibi (gobernado por el Jeque)	33.455	26.000	43.885

^a Los Estados enumerados no incluyen la Sultanía de Haushabi ni los tres Estados que se unieron a la Federación en 1965, es decir, Alawi, Muflahi y Alto Aulaqi.

36. Fuera de la Federación, se dispone de cifras correspondientes a los presupuestos de Quaiti y Kathiri. Los ingresos calculados para Quaiti durante el ejercicio 1964-1965 ascendieron a 869.213 libras esterlinas, 455.700 de las cuales se recaudaron por derechos de aduanas. Los cálculos de gastos para el mismo año ascendieron a 854.235 libras esterlinas, 177.306 de las cuales correspondían a educación, 129.229 a gastos militares, 108.982 a la gendarmería armada, 62.112 a la sanidad pública y 58.741 a obras públicas.

37. En Kathiri, el cálculo de ingresos durante el año 1964-1965 ascendió a 76.962 libras esterlinas, 37.800 de las cuales se recaudaron por derechos de aduanas y 15.964 consistieron en subvenciones y préstamos del Reino Unido. Los cálculos de gastos para el mismo año ascendieron a 72.548 libras esterlinas, incluso 13.164 libras esterlinas para la gendarmería armada, 9.990 libras esterlinas para educación y 8.566 libras esterlinas para sanidad pública.

Planes de desarrollo

38. Conforme a su actual Plan de Desarrollo (1963-1966), el Gobierno Federal proyecta gastar 9.750.000 libras esterlinas en desarrollo económico.

39. Las estipulaciones financieras del Plan se pueden resumir así:

	Corrientes (En libras esterlinas)	De capital
a) <i>Económicas</i>		
Agricultura y pesquerías	266.383	813.608
Industria y comercio ..	—	41.470
b) <i>Sociales</i>		
Enseñanza	584.516	502.560
Sanidad	195.630	245.000
Orientación nacional e información	34.823	60.250
c) <i>Infraestructura</i>		
Aviación civil y navegación	17.500	450.000

	Corrientes (En libras esterlinas)	De capital
Interior	271.045	5.668.135
Correos y telecomunicaciones	13.000	300.000
TOTAL	1.382.897	8.081.023
Reservas		286.080
TOTAL GENERAL		9.750.000

40. Al 31 de marzo de 1965, las asignaciones de fondos de los Programas de Desarrollo y Bienestar Colonial ascendían a 3.670.000 libras. Esas asignaciones para obligaciones aprobadas o proyectadas se reparten en la forma siguiente:

	Corrientes (En miles de libras esterlinas)	De capital
a) <i>Económicas</i>		
Agricultura y regadío..	128	521
Pesquerías	45	91
Cooperativas y comercialización	55	44
	228	656
b) <i>Sociales</i>		
Educación	620	557
Sanidad	300	223
Información	7	1
	927	781
c) <i>Infraestructura</i>		
Carreteras	15	641
Obras públicas	121	255
Aviación civil	—	14
	136	910
Administración	32	—
TOTAL	1.323	2.347

41. Al 31 de marzo de 1965 se había gastado aproximadamente un millón de libras esterlinas de esos créditos.

42. Algunos Estados miembros de la Federación tienen sus planes de desarrollo propios. Para el período 1963-1966 se asignó a los Estados miembros de la Federación, con cargo a fondos de los Programas de Desarrollo y Bienestar Colonial, una suma total de un millón y medio de libras esterlinas.

43. El programa de desarrollo iniciado en Adén en 1960 se terminó en 1965: el total de desembolsos ascendió casi a seis millones de libras esterlinas. Se han trazado las líneas generales de un nuevo plan quinquenal (1965-1970) en la forma siguiente:

(En miles de libras esterlinas)

Desarrollo industrial y económico...	1.100
Educación	1.640
Sanidad	695
Bienestar social	135
Desarrollo del municipio en pueblos y aldeas	588
Estadio deportivo	150
Carreteras, tierras y viviendas	2.655
Nuevo aeropuerto y edificio terminal	700
Servicios públicos	4.690
Edificios oficiales	475
TOTAL	12.828

44. En el Protectorado Oriental las asignaciones para el desarrollo correspondientes al período 1964-1965 se distribuyeron como sigue: 47,2% para educación, 14% para sanidad, 13% para agricultura, 7,2% para carreteras, 6,5% para pesquerías, 5,2% para cooperativas y comercialización y 5,2% para suministro de agua.

45. En Quaiti, las asignaciones de fondo estatales para el desarrollo ascendieron a 100.000 libras esterlinas en 1964-1965. Los gastos se distribuyeron en la forma siguiente: 39% para suministro de agua, 23,9% para educación, 15,3% para sanidad, 13,3% para carreteras, 5% para suministro de energía eléctrica y 3,5% para pesquerías. A fines de marzo de 1965 el saldo no utilizado del Quaiti Development Fund fue de 193.046 libras esterlinas. El Quaiti State Special Funds for Harbour Development and Coastal Works totalizó 300.000 libras esterlinas en 1964-1965. En el mismo año los gastos con cargo al fondo fueron de 50.000 libras esterlinas.

46. Algunos proyectos ejecutados en Quaiti son financiados conjuntamente por el Reino Unido y fuentes locales. En Kathiri no existen recursos locales para el desarrollo.

47. En virtud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector del Programa Ampliado), el Territorio recibirá servicios de asesoramiento en 1965-1966 que ascenderán a 20.500 libras esterlinas. El año anterior el UNICEF proporcionó ayuda por un total aproximado de 22.400 libras esterlinas para servicios de enseñanza y 24.000 libras esterlinas para suministros médicos y pensiones de estudios. El Fondo Especial de las Naciones Unidas ha aprobado un plan de cuatro años para investigar las posibilidades de las pesquerías en el Territorio; el plan, que debía comenzar

en 1965, requerirá gastos por valor de 250.000 libras esterlinas.

48. En una declaración hecha en Londres después de conversaciones con Ministros de la Federación, el Subsecretario de Estado a cargo de las relaciones con el *Commonwealth* dio seguridades de que la ayuda del Reino Unido al territorio no terminará con la independencia. La forma y extensión de dicha ayuda se decidirá cuando el momento de la independencia esté más próximo.

Situación social

49. En diciembre de 1964 la mano de obra total en el Estado de Adén se calculó en 80.404 personas, distribuidas en la forma siguiente:

Trabajadores portuarios	7.550
Edificación y construcción	12.629
Empresas industriales	13.296
Comercio al por menor y al por mayor.....	10.694
Policía y otros servicios de la Administración pública	17.860
Servicios domésticos	17.000
Varios	1.375
TOTAL	80.404

50. En 1964 la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo registró 4.616 colocaciones. A fines del mismo año el número de desempleados inscritos ascendía a 3.668, o sea aproximadamente la misma cifra que en 1963. Había dieciocho sindicatos registrados y cuatro organizaciones de empleadores, con 21.869 y 29 afiliados respectivamente.

51. En septiembre de 1963 se creó el Aden Joint Advisory Council para asesorar al Gobierno sobre política laboral, legislación del trabajo y todas las cuestiones de interés común. El Council incluye representantes del movimiento sindical; ha recomendado que tanto los empleadores como los sindicatos apoyen y se adhieran a un código nacional de relaciones industriales que establece, entre otras cosas, las obligaciones convenidas de la dirección y los sindicatos en cuestiones de relaciones industriales, y métodos para solucionar las disputas gremiales.

Sanidad

52. No se ha comunicado ninguna información al respecto.

Situación de la enseñanza

53. En 1964 había en la Federación 152 escuelas primarias oficiales (22.181 alumnos), 12 escuelas que reciben ayuda del Gobierno y cinco escuelas primarias particulares (4.732 alumnos). La educación a nivel intermedio la proporcionaban 20 escuelas oficiales (5.555 alumnos), 10 escuelas que recibirán subsidios y cinco escuelas particulares (2.709 alumnos). Había seis escuelas secundarias oficiales (1.617 alumnos) y ocho escuelas secundarias con y sin subvención oficial (975 alumnos).

54. Los gastos hechos por la Federación en materia de educación durante el año 1964-1965 se calcularon en 1.297.991 libras esterlinas para los gastos ordinarios y 37.872 libras esterlinas para los gastos de capital. Apro-

ximadamente el 13% de los gastos correspondientes a todas las formas de enseñanza fue costado por el Gobierno del Reino Unido. La ejecución de dos planes de desarrollo de la enseñanza preparados por el Ministerio Federal de Educación para el Estado de Adén (1963-1969) y para los estados rurales (1963-1966) fue postergada debido a la falta de fondos. Sin embargo, se logró hacer algo de lo previsto en planes de desarrollo anteriores en materia de edificación.

55. La política del Ministerio de Educación es proporcionar matrícula en las escuelas de nivel intermedio al 50% de los alumnos que terminan la escuela primaria; sin embargo, solamente alrededor del 25% de los que egresan de las escuelas intermedias logran ingresar a las escuelas secundarias. En el Estado de Adén se proporciona enseñanza secundaria a un 60% de los muchachos y a un 20% de las muchachas.

56. En 1964 se habían concedido 70 becas para estudiar en el extranjero, 52 de ellas para seguir estudios en el Reino Unido.

57. En 1964-1965 había aproximadamente 15.935 niños en las escuelas primarias de los Estados no federados, lo que representa un aumento de aproximadamente el 20% con respecto a 1963-1964. En una gran zona del Estado de Mahri no existe aún prácticamente instrucción pública. El aumento de las actividades de construcción y la consiguiente escasez de mano de obra obligaron a aplazar la edificación de cuatro nuevas escuelas diurnas para niños beduinos. Las asignaciones de becas otorgadas por el Reino Unido a estudiantes del Protectorado Oriental de Adén para escuelas de nivel intermedio y secundarias ascendieron a 12.837 libras esterlinas en 1962-1963, a 17.106 libras esterlinas en 1963-1964 y a 36.254 libras esterlinas en 1964-1965. Durante el último año escolar 14 estudiantes del Protectorado Oriental de Adén siguieron estudios en el extranjero con becas del gobierno; diez de ellos estaban estudiando en el Reino Unido. Doce estudiantes eran originarios de Quaiti y dos de Kathiri. A continuación se da el número de escuelas, maestros y alumnos en esos dos Estados:

PRIMARIA					
Alumnos					
	<i>Escuelas</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>	<i>Maestros</i>
<i>Oficiales</i>					
Quaiti	74	8.968	1.904	10.872	218
Kathiri	4	878	168	1.046	26
<i>Subvencionadas</i>					
Quaiti	5	765	58	823	17
Kathiri	22	2.216	260	2.476	68
<i>Particulares</i>					
Quaiti	—	—	—	—	—
Kathiri	9	695	—	695	19
	114	13.522	2.390	15.912	348

INTERMEDIA					
Alumnos					
	<i>Escuelas</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>	<i>Maestros</i>
<i>Oficiales</i>					
Quaiti	10	1.847	92	1.939	104
Kathiri	4	335	—	335	16
<i>Subvencionadas</i>					
Quaiti	—	—	—	—	—
Kathiri	1	51	—	51	3
<i>Religiosas</i>					
	5	218	—	218	9
	20	2.451	92	2.543	132

58. En Quaiti hay una escuela secundaria de varones en la que están matriculados 133 alumnos.

C. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DE CIERTAS PETICIONES PROCEDENTES DE ADÉN

59. En la 397a. sesión del Comité Especial, celebrada el 18 de marzo de 1966, el representante de Irak, hablando sobre una cuestión de orden, se refirió a va-

rios telegramas enviados por funcionarios del Gobierno de Adén (A/AC.109/PET.443 a 445), detenidos y encarcelados después de allanárseles el domicilio por la noche, lo que requería tomar medidas inmediatamente e incluso el despacho de una comisión de encuesta. Añadió que su delegación había consultado a otras delegaciones sobre el problema de las medidas provisionales que se podrían tomar, y había preparado un proyecto de resolución relativo a los asuntos urgentes mencionados en las comunicaciones. En la declaración que formuló en

la 396a. sesión, el representante del Reino Unido había manifestado que su delegación seguiría colaborando con el Comité Especial e informándole acerca de su política. Las tres peticiones que se estaban estudiando daban cierta idea de la forma en que el Reino Unido estaba realizando sus objetivos.

60. El orador dio lectura al texto de un proyecto de resolución conjunto presentado por su país, junto con Malí, la República Unida de Tanzania, Siria y Túnez (A/AC.109/L.363). En el proyecto de resolución, que no entraba en el fondo de la cuestión de Adén, se lamentaba que la Potencia administradora hubiese procedido a efectuar arrestos en masa de la población de Adén, y se pedía al Secretario General que comunicase a la Potencia administradora la profunda preocupación del Comité Especial. Lo menos que podía hacer el Comité Especial en esta coyuntura era aprobar ese proyecto de resolución.

61. El representante de Siria manifestó que las peticiones probaban que el Reino Unido no había cumplido con las disposiciones del párrafo 8 de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General cesando toda acción represiva contra el pueblo de Adén. Las pruebas sometidas al Comité Especial demostraban que a medianoche se habían efectuado arrestos y torturas físicas y mentales. El proyecto de resolución, que debía ser aprobado inmediatamente, estaba en completa armonía con la resolución 2023 (XX). Si alguna duda se tenía acerca de los hechos descritos en las peticiones, las Naciones Unidas debían hacerse presentes en Adén con el fin de averiguar si los hechos eran ciertos. Añadió que su delegación estaba segura de que eran ciertos y que existía una situación de urgencia que exigía la acción inmediata del Comité Especial. Lo menos que el Comité podía hacer era pedir a la Potencia administradora que desistiera de esos actos.

62. En la 398a. sesión, el representante de Afganistán sugirió que en el primer considerando del proyecto de resolución se suprimieran las palabras "torturas físicas y mentales", y que al fin del párrafo 2 de la parte dispositiva se añadiese la frase siguiente: "y ponga fin a todas las medidas represivas contra la población del territorio". Si se aceptaban esas modificaciones, Afganistán, Etiopía, India, Irán, Sierra Leona y Yugoslavia se unirían a los autores del proyecto.

63. El representante de Túnez aceptó las modificaciones en nombre de los autores del proyecto de resolución.

64. El representante de Etiopía apoyó el proyecto de resolución así modificado porque su aprobación constituiría una medida de carácter provisional hasta que se examinase en debida forma la cuestión de Adén. Aunque el proyecto de resolución no se lo pedía formalmente, el Secretario General sin duda daría cuenta al Comité Especial de las medidas que se adoptasen para su aplicación.

65. El representante del Reino Unido dijo que en cuatro oportunidades, del 24 de febrero al 14 de marzo, las autoridades encargadas de la seguridad en Adén habían arrestado un total de 38 personas pertenecientes a diversas ocupaciones, y las interrogaron en virtud del apartado 1) del párrafo 3 del *Federal Emergency Decree*. Se había puesto en libertad a tres de ellas.

66. Contrariamente a los cargos formulados en las peticiones presentadas al Comité Especial, las autoridades encargadas de la seguridad procedían a arrestos únicamente cuando tenían pruebas de que las personas arrestadas habían participado en actos de violencia o se habían propuesto hacerlo. No se arrestaba ni se detenía a nadie por razón de sus opiniones políticas. Se reunía periódicamente un tribunal imparcial para examinar cada caso, y se recomendaba poner en libertad a las personas detenidas cada vez que ello era posible. Los interrogatorios se realizaban con arreglo a los procedimientos permitidos en el plano internacional; como dichos interrogatorios habían permitido reunir numerosos datos nuevos sobre los actos de violencia que se proyectaban en Adén, así como descubrir importantes cantidades de armas y de municiones, era innegable que las personas interrogadas estaban complicadas en actos o proyectos de terrorismo. No había habido arrestos arbitrarios sino únicamente arrestos efectuados a base de informaciones precisas, en interés de la seguridad del conjunto de la población. Entre las personas arrestadas había un reducido número de funcionarios y estudiantes, pero si tales personas aparecían comprometidas en actos de violencia no podían esperar un tratamiento diferente de los demás.

67. Por lo que hacía a los cargos de que se habían aplicado torturas, recordó que se habían hecho acusaciones similares en la Cuarta Comisión, en el período de sesiones de la Asamblea. La delegación británica las rechazó entonces, recordando que se había realizado una investigación y que no se había hallado prueba alguna de que hubiese habido torturas. El representante del Reino Unido declaró de nuevo categóricamente que no se torturaba ni se maltrataba a los prisioneros, y que los cargos que examinaba el Comité Especial no se apoyaban en hecho alguno. Por lo demás, un representante de la Cruz Roja Internacional visitaba a la sazón el centro de detención de Adén; sería difícil permitir semejante visita si fuesen ciertos los cargos de malos tratos.

68. El representante del Reino Unido recordó los esfuerzos que su Gobierno había realizado para hacer que cesaran los actos de violencia y de terrorismo que se repetían desde hacía dos o tres años en Adén, y que constituían un obstáculo al progreso del Territorio hacia la independencia. Su delegación había dado pruebas al Comité de que la violencia era inspirada y organizada desde fuera de Arabia Meridional. El 2 de septiembre de 1965 la delegación del Reino Unido había citado ante el Comité una declaración del Secretario para las Colonias en que éste afirmaba que estaba dispuesto a examinar todas las propuestas relativas al estado de emergencia que resguardasen la seguridad de la población y de la base militar de Adén. El 19 de octubre de 1965, esa delegación había declarado en la Cuarta Comisión que su Gobierno suspendería las medidas de emergencia que había tenido que tomar para asegurar el orden en el Territorio en cuanto cesasen los actos de terrorismo, y había demostrado también que los cargos de arrestos en masa eran sumamente exagerados, ya que el número de personas en prisión en Adén y en el resto de la Federación era inferior a 90. El 14 de marzo de 1966 había 75 personas detenidas en Adén y 15 en otros puntos del territorio de la Federación. El 5 de noviembre de 1965, Lord Caradón había declarado en la 1368a. sesión de la Asamblea General que los propósitos de libre determinación e independencia del Gobierno del Reino Unido eran retardados e impedidos por la campaña

de violencia, y que las medidas tomadas para hacer frente a dicha violencia se suspenderían tan pronto como ésta cesara. Ultimamente, el 3 de febrero de 1966, el Subsecretario parlamentario de la Secretaría de Colonias había vuelto a afirmar en la Cámara de los Comunes del Reino Unido que las medidas de emergencia se suspenderían tan pronto como se pudiese hacerlo sin perjuicio de la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley.

69. Contrariamente a lo que habían dicho ciertas delegaciones al condenar las medidas de seguridad del Gobierno del Reino Unido, los actos de violencia no ayudaban en nada a Arabia Meridional a conseguir más pronto su independencia; aún más, retardaban el proceso constitucional de consultas y conversaciones que debía permitirle alcanzar esa independencia. Por lo demás, en la mayoría de los casos las víctimas eran civiles árabes totalmente ajenos a la administración británica: así por ejemplo, desde la Navidad de 1965, los actos terroristas habían causado la muerte o habían herido tres veces más víctimas entre los árabes que entre los europeos. En realidad, la violencia no tenía propósitos imaginables. El Gobierno del Reino Unido, lejos de resistir a la idea de independencia, había fijado como plazo el año 1968 para concederla.

70. En el curso de las últimas semanas se habían producido hechos alentadores que permitían esperar el establecimiento de un nuevo ambiente en el que los representantes de todos los matices de opinión pudieran reunirse y resolver sus divergencias en forma que permitiera al país adelantar en la vía de la independencia dentro de la unidad. En primer lugar, el Gobierno Federal había pedido que se autorizara el regreso a Adén de las personas exiliadas. Esto se estaba ya poniendo en práctica. En segundo lugar, en febrero último se habían publicado propuestas constitucionales elaboradas por dos expertos contratados por el Gobierno Federal, y se habían comunicado a todos los Miembros de las Naciones Unidas a petición del Gobierno Federal; si bien a nadie se obligaba a aceptarlas en su totalidad o en parte, dichas propuestas podían servir de punto de partida para un análisis constructivo y para decisiones apropiadas; en tercer lugar, el Reino Unido había anunciado en su Libro Blanco sobre la defensa que retiraría sus tropas de la base de Adén en cuanto Arabia Meridional alcanzase la independencia, o sea, en 1968 a más tardar. El orador deseaba que el Comité Especial atribuya a estos elementos positivos toda la importancia que merecían y que no se ofuscase por el hecho de que las autoridades de Adén hubieran tenido que arrestar a 38 personas en la tarea de tratar de detener la violencia que perjudica el estudio de los problemas constitucionales.

71. El representante del Reino Unido formuló finalmente observaciones sobre el proyecto de resolución A/AC.109/L.263/Rev.1 a la luz de los hechos que acababa de describir. En lo que respecta al preámbulo, la supresión en su primer párrafo de la alusión a torturas físicas y mentales era una medida acertada, pues se trataba de un cargo totalmente desprovisto de fundamento y sin prueba alguna; por otra parte, el orador recordó que la resolución 2023 (XX), mencionada en el segundo considerando, había sido considerada inaceptable por 21 delegaciones aunque sus autores, accediendo a una petición de América Latina y teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por el Reino Unido, ha-

bían accedido a retirar del texto ciertos términos que equivalían a una incitación a la violencia.

72. En el párrafo 1 de la parte dispositiva, al pretender que en Adén se habían efectuado arrestos en masa — y el orador había demostrado que esta afirmación estaba desmentida por los hechos — los autores omitieron referirse a las razones de tales arrestos, que habían seguido a una serie de atentados y asesinatos, figurando entre éstos el del Presidente de la Aden Trades Union Conference, Sr. Ali Hussein Qadi, que aunque partidario del movimiento de liberación se había opuesto a la violencia. En las últimas semanas se ha asesinado también a un árabe que fue en otro tiempo carcelero, a un súbdito británico superintendente de un garaje británico y a un hombre de negocios de Alemania Occidental. Difícilmente podría el Comité Especial pasar por alto estos asesinatos, pero parecería que eso era lo que hacía el proyecto de resolución al condenar las medidas tomadas para hacer frente a la violencia sin mencionar los actos de violencia que las hicieron necesarias.

73. El párrafo 2 de la parte dispositiva, en su forma enmendada, era inaceptable porque daba a entender que las medidas tomadas por el Gobierno del Reino Unido y los Gobiernos de la Federación de Adén estaban dirigidas contra la población. El representante del Reino Unido había precisado ya que, por el contrario, tales medidas tenían por objeto proteger a la población contra los actos de violencia que se multiplican en el Territorio, y representaban las medidas que cualquier gobierno tenía el deber de tomar en una situación semejante.

74. En consecuencia, la delegación del Reino Unido estimaba que el proyecto de resolución era inaceptable, aun en su versión modificada. La actitud correcta del Comité Especial, en la causa de la descolonización, consistiría en ejercer su influencia para persuadir a todos los partidarios de la violencia, fuese en Adén o en el exterior, a que abandonaran dicha violencia, que no tenía ningún objeto, y cooperasen para que, al cabo de un breve período de transición pacífica, el Territorio alcanzara la independencia en 1968. La delegación del Reino Unido pedía a los autores que retirasen su proyecto de resolución, pero añadió que, si se lo sometía a votación, votaría en contra. Señaló que las informaciones y explicaciones que había dado al Comité mostraban que valía la pena oír a ambas partes en el conflicto más bien que tomar una decisión precipitada e inconsulta.

75. El representante del Irak señaló que el representante del Reino Unido había aconsejado al Comité que no adoptara una resolución precipitada con respecto a la situación de Adén, mientras recrudecía la represión en el Territorio y mientras se detenía, arrestaba y torturaba a las personas. Si la delegación del Irak había consentido en suprimir del texto del proyecto de resolución las palabras "torturas físicas y mentales", lo había hecho únicamente con el fin de permitir que un mayor número de delegaciones pudiera votar a favor de él.

76. Los detalles que había dado el representante del Reino Unido con respecto al número de detenidos, unos cuarenta, no eran muy convincentes. Si la Potencia administradora no recurría ni a los arrestos en masa ni a la tortura, cabría preguntar por qué no aceptaba que una comisión se trasladase a Adén para hacer allí investigaciones, como lo habían pedido los peticionarios.

En efecto, el Reino Unido se había negado siempre a admitir la intervención de las Naciones Unidas, declarando que era el único responsable del mantenimiento del orden en el Territorio y que se encargaba de su pacificación. La delegación del Irak, que tenía dudas respecto a la naturaleza de esa pacificación, no había cesado de insistir en que se adoptaran medidas contra las Potencias administradoras que hacían caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Declaración de Derechos Humanos y no tenían en cuenta los deseos de los pueblos interesados.

77. Se había informado que la Potencia administradora celebraba consultas respecto a las modificaciones que se debían introducir en la constitución. Ahora bien, la solución preconizada por las Naciones Unidas recomendaba en primer lugar la evacuación del Territorio para que la población pudiera luego pronunciarse sobre su propia Constitución. El orador señaló que según el párrafo 16 del documento distribuido por la delegación del Reino Unido referente a las propuestas constitucionales para Arabia Meridional, las consultas se habían limitado a dos reuniones con el Alto Comisionado, y a estudios realizados con siete miembros de la comunidad, diecisiete funcionarios, tres representantes diplomáticos y varias conocidas personalidades.

78. Dada la urgencia de la situación, el representante del Irak invitó al Comité Especial a que votara a favor del proyecto de resolución, y precisó que se invitara también al Secretario General a que informase al Comité Especial acerca de las medidas que la Potencia administradora adoptara para poner en práctica la resolución.

79. La representante de los Estados Unidos de América observó que en el curso de los últimos años Arabia Meridional había evolucionado constantemente hacia la libre determinación y la independencia. El Reino Unido había indicado claramente su intención de otorgar la independencia en 1968 a más tardar y, como todos los miembros del Comité Especial lo esperaban, dentro de la paz y la tranquilidad. El proyecto de resolución A/AC.109/L.263/Rev.1 no parecía de naturaleza tal que pudiera contribuir a un progreso pacífico, y esa era la razón por la cual la delegación de los Estados Unidos votaría en contra. El proyecto se había presentado por primera vez el 18 de marzo y ese día se intentó someterlo a votación sin dar al representante de la Potencia administradora la posibilidad de consultar a su Gobierno sobre los supuestos hechos a que se aludía en el texto. Felizmente había prevalecido la razón, y el Comité Especial acababa de oír decir al representante del Reino Unido que una ola de terrorismo había obligado a la Potencia administradora a detener a cierto número de individuos sospechosos de ser cómplices en los actos de violencia.

80. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, al explicar su voto negativo sobre la resolución 2023 (XX), la delegación de los Estados Unidos había subrayado especialmente que en esa resolución no figuraba una sola palabra sobre el terrorismo ni sobre los esfuerzos desplegados por el Reino Unido para dar solución al problema. El proyecto de resolución que ocupaba al Comité Especial adolecía de los mismos defectos. En lugar de ser constructivo, podía más bien estimular los disturbios, que retrasarían notablemente el ordenado proceso por el cual el Territorio debía llegar a la independencia.

81. Como se acercaba la fecha de ese acontecimiento, el Comité Especial tenía, para con Arabia Meridional, el deber de contribuir a él eficazmente y con espíritu de buena voluntad y de comprensión, mediante consejos inteligentes y constructivos que pudieran aprovechar quienes se preocupaban por el bienestar de su pueblo y la paz de la región.

82. El representante de Siria manifestó que el procedimiento observado en la sesión precedente se hizo necesario por lo súbitas que fueron las medidas de represión adoptadas por la Potencia colonial. Por otra parte, no era la primera vez que se actuaba en esa forma en las Naciones Unidas.

83. El representante del Reino Unido, al explicar la actitud de su Gobierno, había dado la impresión de que el derecho estaba de su parte, pero muchos Miembros de las Naciones Unidas, que habían visto a su país devastado y a su pueblo desarraigado por las antiguas Potencias coloniales en nombre de un supuesto mandato sagrado, sabían de qué lado estaba el derecho. Por otra parte la resolución 2023 (XX) no dejaba duda alguna a este respecto; reafirmaba en el párrafo 5 de su parte dispositiva, "el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y a liberarse del dominio colonial" y reconocía "la legitimidad de sus esfuerzos por lograr los derechos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales". Preguntó si la legalidad consistía en ocupar el territorio militarmente, por la fuerza. Además, el representante del Reino Unido había aludido al Gobierno Federal de Arabia Meridional. El orador sólo quería recordar al representante del Reino Unido que en el párrafo 4 de la misma resolución la Asamblea General "deplora... que la Potencia administradora haya intentado establecer un régimen no representativo en el Territorio, con miras a concederle la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General y hace un llamamiento a todos los Estados para que no reconozcan independencia alguna que no se base en los deseos del pueblo del Territorio, libremente expresados en elecciones celebradas mediante el sufragio universal de los adultos".

84. En cuanto al proyecto de resolución, entre cuyos autores se contaba Siria, surgía de la declaración del propio representante del Reino Unido en el sentido de que se había encarcelado a ciertas personas porque dirigían un movimiento de liberación, lo cual es completamente legítimo. De hecho, puesto que existía una base militar en su Territorio, todo el pueblo de Adén está preso. El texto presentado al Comité Especial era, pues, muy moderado.

85. El representante de Polonia declaró que su delegación había apoyado la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, en la que se pedía explícitamente a la Potencia administradora "poner fin al estado de excepción" y hacer cesar "toda acción represiva contra el pueblo del Territorio". No obstante, apenas transcurridos cinco meses desde la aprobación de esa resolución, las comunicaciones recibidas de Adén y la prensa británica misma daban cuenta de nuevos arrestos que no dejaban duda alguna sobre la gravedad de la situación en el Territorio. La delegación de Polonia estimaba que el Comité Especial debía expresar su preocupación respecto de los últimos acontecimientos de Adén, y podría aprobar el proyecto de resolución A/AC.109/L.263/

Rev.1 como medida de urgencia. Dio su pleno apoyo a este proyecto de resolución y dijo que votaría a su favor.

86. El representante de Italia expresó reservas sobre el procedimiento que había interrumpido el desarrollo ordenado de los trabajos del Comité y provocado un debate sobre el proyecto de resolución relativo a Adén, con tanta más razón cuanto que tres meses después del último período de sesiones de la Asamblea General el Comité Especial no había logrado aún organizar su período de sesiones y entenderse con respecto a sus métodos de trabajo. En su concepto, el clima de violencia que reinaba en Adén justificaría ampliamente un examen completo y urgente de todo el problema, aun antes de que se adoptara una decisión sobre el viaje del Comité Especial a África.

87. Al examinar el proyecto de resolución A/AC.109/L.263/Rev.1, el Comité debería asegurarse de dos cosas, a saber, que la Potencia administradora había efectuado arrestos en masa que no se justificaban ni por la situación ni por las circunstancias, y que, en consecuencia, eran ilegales y contrarios a las resoluciones de la Asamblea General. La versión enmendada de ese proyecto era sin duda mejor, pero agrandaba el fondo del problema al hablar de "todas las medidas represivas contra la población del Territorio", con lo que ya no sólo se refería a los acontecimientos que habían provocado la presentación del proyecto de resolución, sino al conjunto de la situación en Adén, y eso rebasaba la intención de los autores. El orador temía que con ello el Comité se erigiese en tribunal, y el caso era que no tenía ni la competencia ni los medios para pronunciar un juicio independiente e imparcial.

88. La delegación de Italia estimaba que mientras un país administraba un Territorio como Potencia titular tenía el derecho, y también el deber, de adoptar todas las disposiciones necesarias para mantener el orden y proteger a la población. Los hechos señalados al Comité Especial no probaban de manera concluyente que la Potencia administradora se hubiese extralimitado en el mantenimiento del orden en Adén. Por último, la delegación de Italia no creía que el proyecto de resolución contribuyese a facilitar la tarea común de la Potencia administradora y del Comité Especial, o sea buscar todos los medios capaces de conducir al Territorio a la libre determinación y a la independencia en 1968 a más tardar. En consecuencia no podría apoyar el proyecto de resolución A/AC.109/L.263/Rev.1.

89. El representante de Bulgaria manifestó que de la declaración del representante del Reino Unido surgía la necesidad de que el Comité Especial votara sobre un proyecto de resolución como el que le ocupaba. El representante del Reino Unido no había refutado los hechos señalados en las peticiones ni había negado que estas últimas provenían de diferentes sectores de la población, ni que la Potencia administradora había adoptado medidas represivas. Era lamentable que la Potencia administradora considerase que había actuado conforme al derecho, y estimase que era la autoridad colonial la que debía decidir de la fecha y las modalidades del otorgamiento de la independencia a los territorios que administraba. En el caso de Adén, el representante del Reino Unido había afirmado que si se veía demorado el logro de la independencia por el Territorio, ello se debería a que la población, en lugar de cooperar con la Potencia administradora, luchaba contra ella y trataba de imponer sus propias condiciones. La población de ese Territorio era víctima de medidas de represión adop-

tadas por el Reino Unido y tenía una idea muy precisa del régimen y de la constitución que quería darse. La situación sería mejor, pues, si el Reino Unido le diera la posibilidad de expresar su opinión. Por todos estos motivos, el representante de Bulgaria apoyaba el muy moderado proyecto de resolución revisado presentado al Comité Especial.

90. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el representante del Reino Unido nada había agregado a lo que el Comité ya sabía; no había refutado ninguno de los hechos mencionados en los telegramas, sino que había tratado simplemente de justificar los arrestos.

91. A este respecto, la delegación de la URSS rechazaba categóricamente la afirmación de que la represión británica estaba dirigida contra actos de terrorismo cometidos por personas alentadas y ayudadas desde el exterior sin quienes la cuestión de la independencia de Adén habría realizado grandes progresos. Por su parte, los representantes de los Estados Unidos y de Italia habían pedido al Comité Especial que no adoptase una decisión precipitada alegando que la mejor manera de ayudar a la población de Adén era dejar el asunto enteramente en manos del Reino Unido. El orador señaló a la atención del Comité Especial que cada vez que el Gobierno del Reino Unido había querido hacer aplicar ciertas medidas en el Territorio de Adén, había procedido a efectuar arrestos y adoptado medidas de represión: esto había ocurrido cuando se creó la Federación de Arabia Meridional, cuando se estableció la Constitución de Adén y cuando se celebraron después las elecciones. Una vez más, el representante del Reino Unido había confirmado que ciertas personas de Arabia Meridional no aprobaban las medidas adoptadas en favor del desarrollo constitucional del Territorio y pedían que se aplicaran las decisiones de las Naciones Unidas; pues bien, de nuevo se producía una represión y una ola de detenciones. Eso no podía ser mera coincidencia; y el orador estaba convencido de que ese proceder obedecía a una política bien determinada. El Comité debería actuar resueltamente y aprobar el proyecto de resolución que le había sido presentado y que nada de objetable contenía. El Comité daría al aprobarlo la prueba de que sabía resistir a las presiones de las Potencias coloniales y seguía siendo un órgano de combate de las Naciones Unidas; además, haría entender a esas Potencias que la Organización no dejará de reaccionar ante situaciones de ilegalidad.

92. El representante de Dinamarca dijo que su delegación quería subrayar que en esta, como en ocasiones anteriores, el Reino Unido había puesto de manifiesto su voluntad de colaborar con el Comité Especial al proporcionar información sobre los territorios bajo su administración. El Comité debía apreciar el hecho de que el Gobierno del Reino Unido hubiera realizado una investigación urgente y completa de las recientes detenciones de Adén.

93. Declaró que su país apoyaba decididamente el derecho de libre determinación en Asia, Europa o cualquier otro lugar del mundo y, por consiguiente, también apoyaba los esfuerzos de los habitantes de Arabia Meridional por conseguir la independencia. Pero la delegación danesa no veía cómo el proyecto de resolución podía estimular el proceso de descolonización en ese Territorio; por un lado, no tenía en cuenta todos los factores relacionados con las detenciones y, por otro, se refería a cuestiones políticas más amplias que esta-

ban en juego en la cuestión de Adén y que en realidad no habían sido objeto de debate. Por ello la delegación de Dinamarca se abstendría en la votación sobre el proyecto de resolución.

94. El representante de la India manifestó que, mientras el representante del Reino Unido había declarado que desde el 24 de febrero de 1966 sólo habían sido detenidas en Adén treinta y ocho personas, según una información recibida por su delegación, durante los últimos siete o diez días únicamente el número de detenciones había sido mucho mayor y casi todas ellas se habían practicado de noche. Tenía entendido, además, que la situación de Adén era muy tensa en aquel momento.

95. El representante de la República Unida de Tanzania apuntó que la declaración del representante del Reino Unido no hacía más que confirmar lo que era la parte esencial del problema. En los telegramas se hablaba de arrestos y de torturas. La mayor parte de los miembros del Comité Especial habían padecido en el pasado el régimen colonial, sabían lo que entrañaba y hablaban con conocimiento de causa. Todas las sospechas que podían abrigar habían sido confirmadas por el representante del Reino Unido. De hecho, la delegación de Tanzania hubiera sido la última en esperar otra cosa de la respuesta del representante del Reino Unido. Este, por otra parte, no había negado que los peticionarios fueran personas dignas de crédito, y todos ellos habían ocupado puestos elevados en el Gobierno de Adén.

96. El representante del Reino Unido sólo había declarado que su Gobierno actuaba como lo hacía en Adén porque tenía contraída una responsabilidad y, como sabía muy bien la delegación de Tanzania, esa responsabilidad consistía en mantener un régimen colonial en el Territorio. En segundo lugar, el representante del Reino Unido había tratado de restar importancia al problema diciendo que su Gobierno había señalado una fecha para la independencia de Adén; la delegación de Tanzania creía firmemente que esa independencia debía de haberse ya otorgado hacía mucho tiempo. En tercer lugar, el representante del Reino Unido había dicho que su Gobierno estaba interesado en las negociaciones y en una solución pacífica, pero que los actos de violencia entorpecían sus esfuerzos; esos llamados actos de violencia, como sabían los que habían vivido bajo la dominación colonial, en realidad sólo eran expresiones de la lucha del pueblo por la independencia. El representante del Reino Unido no había mencionado sus propios bombardeos de aldeas indefensas de Adén. La fuerza del movimiento de liberación de Adén podía juzgarse por el hecho de que entre los detenidos había altos funcionarios públicos y empleados de una línea aérea, que no era una organización independiente.

97. La delegación de Tanzania apoyaba resueltamente el proyecto de resolución, aunque habría preferido que se mantuviera el texto inicial y se incluyera una referencia a las torturas físicas y mentales de que, sin duda, habían sido objeto los detenidos de Adén. No obstante, había aceptado las enmiendas propuestas por el representante de Afganistán porque permitían que otras delegaciones apoyaran el proyecto que esperaba fuera aprobado unánimemente. Comparado con anteriores resoluciones del Comité respecto a Adén, representa las demandas mínimas que el Comité podía presentar. Esperaba que las delegaciones que se inclinaban a apoyar a la Potencia administradora, sencillamente por el gusto de apovarla, reflexionaran y tuvieran presente que siempre debían tomarse en consideración los

intereses de los pueblos para cuya protección se había constituido el Comité, entre ellos el pueblo indefenso de Adén, que sufría bajo el colonialismo.

98. El Comité Especial votó entonces sobre el proyecto de resolución (A/AC.109/L.263/Rev.1) en su 399a. sesión, celebrada el 22 de marzo de 1966. Por 19 votos contra 3 y 2 abstenciones quedó aprobado el proyecto de resolución.

99. A continuación figura la resolución aprobada por el Comité Especial (A/AC.109/153).

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo recibido y examinado las peticiones (A/AC.109/PET.443 a 445) relativas a las medidas de detención y encarcelamiento impuestas por la Potencia administradora contra la población de Adén,

"Recordando la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General de 5 de noviembre de 1965,

"1. Lamenta que la Potencia administradora haya procedido a efectuar arrestos en masa de la población de Adén;

"2. Exhorta a la Potencia administradora a que desista de esos actos y ponga fin a todas las medidas represivas contra la población del Territorio;

"3. Pide al Secretario General que comuniqué a la Potencia administradora la profunda preocupación del Comité Especial por el empeoramiento de la situación en el Territorio."

D. MEDIDAS PRELIMINARES ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

100. En la 414a. sesión del Comité Especial, celebrada el 16 de mayo de 1966, el Presidente señaló el informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General sobre la cuestión de Adén, reproducido en el anexo I al presente capítulo. En la 415a. sesión, celebrada el 18 de mayo, el representante de Yugoslavia, hablando como Presidente del Subcomité de Adén⁶, presentó el informe de éste, que se reproduce en el anexo II al presente capítulo.

101. El representante del Reino Unido dijo que, en una declaración hecha el 16 de mayo en la Cámara de los Comunes, el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido se había referido al anuncio hecho el 13 de mayo de 1966 por el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional en el sentido de que aceptaban las resoluciones de las Naciones Unidas y se propone convocar a una conferencia de todos los gobiernos y grupos políticos de Arabia Meridional a fin de estudiar los medios de poner en práctica esas resoluciones. El Secretario de Relaciones Exteriores había declarado que el Gobierno del Reino Unido había hecho saber claramente en todo momento que aceptaría toda solución del problema constitucional de Arabia Meridional que contase con amplio acuerdo en el Territorio. Celebraba, por ello, la decisión del Gobierno federal de realizar una conferencia representativa, y hacía votos porque todos

⁶ En la 401a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeciones, nombrar al Afganistán para llenar la vacante creada en el Subcomité por la salida de Camboya.

los habitantes de Arabia Meridional sinceramente interesados por el bien de su país juzgaran oportuno participar en ella. El Secretario de Relaciones Exteriores había agregado que, como otros grupos políticos se habían pronunciado también en favor de la aceptación de las resoluciones de las Naciones Unidas, había ampliado el acuerdo en cuanto a los objetivos futuros; todos se encontraban en posición de cooperar para hacer viables las consecuencias prácticas de sus posiciones políticas. El Secretario de Relaciones Exteriores había declarado que se habían atendido ya las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas a la base de Adén con el anuncio de que las fuerzas del Reino Unido se retirarían de dicha base a más tardar en 1968, fecha en que la Arabia Meridional ya habrá obtenido la independencia. El Reino Unido estaría dispuesto a aplicar las recomendaciones relativas al estado de urgencia y a la excarcelación de los detenidos, siempre que se probase satisfactoriamente que el terrorismo en Adén había terminado. El Secretario de Relaciones Exteriores había anunciado que el Gobierno federal había entregado al Alto Comisionado de Adén, para su transmisión al Secretario General de las Naciones Unidas, una carta en que se invitaba a éste a enviar un observador de las Naciones Unidas a la conferencia proyectada. Por último, el Secretario de Relaciones Exteriores había declarado en la Cámara de los Comunes que había pedido al representante permanente del Reino Unido que comunicase a las Naciones Unidas el anuncio del Gobierno federal y que discutiese toda la cuestión con el Secretario General.

102. Tal iniciativa, que era un acontecimiento de gran trascendencia, debía ser motivo de beneplácito para el Comité. Encerraba una esperanza real de que llegara a haber acuerdo general entre todos los sectores de opinión de Arabia Meridional, de modo que el Territorio pudiera avanzar hacia la independencia completa en un clima de negociación pacífica. Quedaban aún por examinar muchos problemas, entre ellos la cuestión de fechas y plazos. El Gobierno federal ha dejado claramente sentado que la finalidad de la conferencia era llegar a un acuerdo sobre un programa encaminado a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. El propio Comité Especial había reconocido de antiguo que se necesitaría una conferencia como paso inicial; así se declaraba francamente en el párrafo 78 del informe del Subcomité de Adén aprobado por el Comité en septiembre de 1965 (A/6000/Rev.1, cap. VI, apéndice II).

103. Las Naciones Unidas han abogado porque hubiese varias etapas en la solución de las dificultades con que tropezaba Arabia Meridional: una conferencia general a la que asistieran todos los habitantes de Arabia Meridional que desearan participar en ella; elecciones libres para instituir un órgano representativo y un gobierno provisional; y la presencia de las Naciones Unidas antes de las elecciones y mientras éstas se celebraran. Merced a la iniciativa del Gobierno federal, esas tres condiciones podrían ser aceptadas por todos. Por supuesto, llevaría cierto tiempo determinar exactamente cómo había de ejecutarse el programa, y la conferencia tendría un grave cometido. Sin embargo, los propósitos eran claros. El Gobierno del Reino Unido acoge con agrado la decisión de convocar una conferencia, sobre la base de la aceptación por el Gobierno federal de las resoluciones de las Naciones Unidas. En lo concerniente a los aspectos constitucionales de las resoluciones, el Gobierno del Reino Unido apoyaba las disposiciones relativas a la celebración de elecciones para constituir

un órgano representativo y establecer un gobierno provisional para la totalidad de Arabia Meridional. La decisión de retirarse de la base y permitir el regreso de los exiliados elimina otros obstáculos para la aplicación de las resoluciones.

104. El representante del Irak señaló que el anuncio del Gobierno federal citado en el párrafo 6 del informe del Secretario General (anexo I), hablaba de "la unificación de nuestra amada patria" y calificaba la fundación de la Federación y la adhesión a ella de otros Estados de medidas vitales y prácticas para el establecimiento de un gobierno central. El Gobierno federal había suscrito los principios de la libre determinación y de la independencia que inspiraban las resoluciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, las resoluciones de las Naciones Unidas no hablaban de la Federación ni del Gobierno federal sino de tres partes: el pueblo del Territorio, la Potencia administradora y las Naciones Unidas. En cuanto a las Naciones Unidas, la independencia significaba algo muy distinto del gobierno actual. Lo que importaba era saber si el Reino Unido, como Potencia administradora de un Territorio no autónomo, aceptaba la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas.

105. El Gobierno federal había pedido que un observador de las Naciones Unidas asistiera a la conferencia propuesta. Sin embargo, lo que la Asamblea quería era la presencia de las Naciones Unidas en el Territorio. Dicha presencia se podría establecer mediante la visita del Subcomité de Adén al Territorio antes de las deliberaciones, en el curso de éstas, o después. El representante del Reino Unido debería decir si su Gobierno aceptaba esa visita.

106. El representante del Reino Unido había mencionado ciertas condiciones. Las únicas condiciones son las que se enuncian en las resoluciones de las Naciones Unidas: la excarcelación de los detenidos, la libertad de expresión para el pueblo y la eliminación de la base militar. Estas condiciones debían cumplirse antes que se pudieran entablar con provecho las negociaciones mencionadas por la delegación del Reino Unido.

107. El representante del Reino Unido manifestó que la posición del Gobierno federal había quedado expuesta con suma claridad; había hecho constar su decisión de aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional. En cuanto a la actitud del Gobierno del Reino Unido, a raíz del anuncio del Gobierno federal había hecho declaraciones que eran de suma importancia, pues allanaban el camino hacia el progreso que todos deseaban. Respecto a la cuestión de la participación de las Naciones Unidas, todos esperaban que la Organización desempeñara un papel eficaz en la difícil tarea de hacer que varios Estados logaran la plena independencia en unidad. El Gobierno del Reino Unido se complacía por el hecho de que el Gobierno federal hubiera propuesto que se nombrara un observador de las Naciones Unidas en la etapa inicial. Ello no impediría en absoluto la presencia de observadores de las Naciones Unidas durante las elecciones y después de ellas, como tampoco otras medidas para que las Naciones Unidas se asociaran al adelanto del Territorio. El Gobierno del Reino Unido celebraría la presencia de observadores de las Naciones Unidas en las elecciones, conforme al párrafo 9 de la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General. Esperaba realizar nuevas consultas al respecto con el Secretario General.

108. El representante del Irak dijo que su delegación consideraba que la Potencia administradora era parte interesada en la cuestión, al paso que el Reino Unido hablaba siempre de la Federación y del Gobierno federal. En ninguna resolución de las Naciones Unidas se mencionaba a la Federación ni al Gobierno federal. No procedía que el Gobierno del Reino Unido celebrase los planes del Gobierno federal, pues era el propio Reino Unido el responsable de ellos.

109. El representante de Yugoslavia señaló a la atención de los miembros del Comité Especial las recomendaciones contenidas en el párrafo 17 del informe del Subcomité (véase anexo II) y expresó la esperanza de que el Comité Especial estimara posible adoptar una decisión sobre el informe en la misma sesión.

110. El representante de Dinamarca encomió al Subcomité por sus trabajos. Al parecer la falta absoluta de contacto sobre las cuestiones más fundamentales entre las partes interesadas en el porvenir de Arabia Meridional había sido hasta la fecha el obstáculo más grave que impedía realizar algún real progreso hacia la creación de un Estado independiente basado en el principio de la libre determinación. Añadió que su delegación celebraba, pues, que el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional hubiera anunciado que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas concernientes al Territorio, con la esperanza de que esa aceptación pudiera servir de base para establecer contactos entre todos los interesados. En cuanto a la convocación de una conferencia para discutir las cuestiones constitucionales, suponía que se había previsto una verdadera conferencia representativa en la que todas las facciones políticas de alguna importancia estarían representadas.

111. La delegación de Dinamarca apoyaba la propuesta de que hubiera una presencia de las Naciones Unidas, que consistiría en un representante del Secretario General, desde el principio mismo de los nuevos esfuerzos encaminados a organizar un estado unificado e independiente. Celebraba que el Reino Unido apoyara la convocación de la conferencia constitucional y el principio de la presencia de las Naciones Unidas.

112. Esperaba que la iniciativa adoptada señalara el fin de la larga paralización política en Arabia Meridional. En esa situación, los esfuerzos de todos los interesados, incluso el Comité Especial, debían encaminarse a asegurar que la nueva iniciativa permitiera avanzar hacia la creación de un Estado independiente en Arabia Meridional basado en los principios democráticos y conforme a los deseos de toda la población. Temiendo esas consideraciones presentes, podría apoyar la aprobación del informe del Subcomité.

113. El representante del Irak consideraba muy satisfactorio el informe del Subcomité de Adén. La actitud de su delegación con respecto a los acontecimientos recientes en el Territorio no había variado. El llamado Gobierno de la Federación de Arabia Meridional no existía en lo que a las Naciones Unidas concernía. Había sólo tres partes interesadas en la aplicación de las resoluciones correspondientes: el pueblo de Adén, las Naciones Unidas y la Potencia administradora. El Comité Especial no podía aceptar la declaración de la Potencia administradora de que el llamado Gobierno federal aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas. La verdad era que el Reino Unido estaba utilizando las arcaicas instituciones tribales de Arabia Meridional para impedir el desarrollo de Adén y perpetuar su

influencia en la región. Así lo decía la propia prensa del Reino Unido. El Reino Unido era la Potencia administradora y sobre él sólo recaía la obligación de llevar a la práctica las resoluciones de las Naciones Unidas. Hay una sola cuestión importante: saber si el Reino Unido estaba dispuesto a cumplir esas resoluciones.

114. La falsedad de la aseveración del llamado Gobierno federal de que representaba al pueblo del Territorio se había puesto aún más en evidencia por los cables recibidos recientemente del Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY), de los miembros del Concejo Municipal de Adén y de otros, en los que se pedía la liquidación de todas las instituciones establecidas por la Potencia colonial, incluso el llamado Gobierno Federal, y el cumplimiento inmediato de las resoluciones de las Naciones Unidas.

115. El Subcomité había recomendado que se encargara otra vez al Gobierno del Reino Unido que hiciera lo posible para que el Subcomité visitara el Territorio, conforme a su mandato. El orador quería saber si el Gobierno del Reino Unido asentiría entonces a ello.

116. El Subcomité había recomendado también que se pidiera al Secretario General que solicitara información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales de socorro acerca de las disposiciones que pensaban adoptar para atender la solicitud que se les hacía en el párrafo 12 de la resolución 2023 (XX). Según el informe del Secretario General (véase anexo I) lo más que cualquiera de esas organizaciones había hecho hasta la fecha era "tomar nota" de la resolución. Era evidente que había que hacer algo más. Por ejemplo, muchos de los que habían sufrido las consecuencias de las medidas de emergencia eran trabajadores; la Organización Internacional del Trabajo debería velar, pues, por que recibieran asistencia. La cuestión quizá podría plantearse en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

117. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que se justificaba que el representante del Irak pusiera en duda una vez más la determinación de la Potencia administradora de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Ni el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido ni el representante de ese país en el Comité Especial habían dicho claramente que el Gobierno del Reino Unido, como Potencia administradora, aceptaba esas resoluciones y estaba dispuesto a aplicarlas sin reservas en Adén y en toda Arabia Meridional. El representante del Reino Unido había eludido la cuestión en la sesión anterior, escudándose en la fórmula familiar de que su Gobierno aceptaba cualquier solución del problema constitucional que permitiera alcanzar una amplia base de acuerdo en el Territorio. Para ocultar su verdadera posición con respecto a Adén, el Reino Unido presentaba al llamado Gobierno de la Federación de Arabia Meridional como representativo del pueblo, e invitaba a todos los demás grupos a apoyar todo lo que éste decidiera hacer.

118. El representante del Reino Unido había hablado extensamente del llamado Gobierno Federal, pero no había dicho una palabra sobre si la Potencia

administradora aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas o se proponía abolir el estado de urgencia, excarcelar a los detenidos políticos y establecer así el ambiente apropiado para que se pudieran aplicar las resoluciones. En cambio, había planteado una serie de condiciones, entre ellas la cesación del "terrorismo". Era evidente que aquellos a quienes el Reino Unido acusaba de terrorismo eran simplemente los que luchaban por la libertad e independencia de su patria. Las condiciones planteadas por el Gobierno del Reino Unido no se ajustaban a las resoluciones de las Naciones Unidas, que constituían la única base para una solución justa. El representante del Reino Unido debía responder claramente a la pregunta del representante del Irak sobre si su Gobierno estaba dispuesto a cumplir esas resoluciones.

119. Como los hechos recientes demostraban sin lugar a dudas que la Potencia administradora estaba tratando de quitar fuerza a las resoluciones de la Asamblea General sobre la cuestión de Adén, el Comité Especial debía seguir los acontecimientos del Territorio con redoblada atención. El informe del Subcomité de Adén reflejaba las opiniones expresadas reiteradamente por el Comité Especial, y sus recomendaciones debían ser aprobadas en la sesión presente como medidas provisionales hasta que se hiciera un examen más detallado de la cuestión en África.

120. La delegación de la URSS asignaba importancia especial a la recomendación de pedir al Secretario General que solicitara información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales de socorro acerca de las disposiciones que pensaban adoptar para atender la solicitud que se les hacía en el párrafo 12 de la resolución 2023 (XX). Hasta la fecha el Comité Especial no había recibido ninguna información sobre las medidas que se proponían adoptar los organismos especializados para cumplir las resoluciones. Era inadmisibles que los organismos se limitaran a informar al Secretario General que habían "tomado nota" de las resoluciones.

121. El representante de Siria declaró que no sólo no había tomado la Potencia administradora las medidas indicadas en el párrafo 78 del informe presentado por el Subcomité de Adén en septiembre de 1965 (A/6000/Rev.1, cap. VI, apéndice II), sino que la situación había empeorado realmente desde esa época. Las declaraciones recientes de la Potencia administradora indicaban que ésta no estaba aplicando la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, en que se deploraba la actitud de dicha Potencia. El llamado Gobierno Federal tampoco estaba cumpliendo los deseos de la Asamblea General. El Reino Unido había llegado a un acuerdo con ese Gobierno imaginario y estaba afianzando su dominio sobre el Territorio detrás de esa fachada.

122. En la sesión anterior el representante del Reino Unido había dicho que había una amplia base de acuerdo en Arabia Meridional sobre los objetivos futuros; sin embargo, los ex dirigentes responsables del Territorio estaban en el exilio o en la cárcel y no podían expresar su opinión. En una resolución de emergencia aprobada el 22 de marzo de 1966 (A/AC.109/153), el Comité Especial había lamentado los arrestos en masa de la población de Adén y exhortado a la Potencia administradora a que desistiera de esos actos y pusiera fin a todas las medidas represivas contra

la población del Territorio. Sin embargo, la Potencia administradora continuaba sus medidas represivas dirigidas contra la lucha del pueblo del Territorio, cuya legitimidad había sido reconocida en el párrafo 5 de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General. La Potencia administradora era la culpable del terrorismo en la región. Dada la importancia de la base militar del Reino Unido y de los intereses petroleros en la región se afirmaba que la situación había mejorado.

123. Los organismos especializados tenían la obligación de adoptar medidas para cumplir la resolución 2023 (XX), y el hecho de que no las adoptaran era motivo de preocupación. Estaba en juego la autoridad de las Naciones Unidas para hacer cumplir sus resoluciones. Cabía esperar que con el tiempo todas las Potencias interesadas aplicaran las resoluciones libremente y no por verse obligadas a hacerlo.

124. La representante de los Estados Unidos de América celebró que el Gobierno federal hubiera aceptado las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional. Los Estados Unidos miraban con simpatía las aspiraciones de los pueblos de Arabia Meridional a la libre determinación y a la independencia. El anuncio reciente del Gobierno federal indicaba que existía un movimiento evidente y continuo en la debida dirección.

125. Esperaba que las Naciones Unidas pudieran desempeñar una función de gran valor en ese movimiento. La Conferencia propuesta debía contribuir a que mejorase la situación y todas las partes debían celebrar que se hubiese pedido que un observador de las Naciones Unidas asistiera a la Conferencia. Con espíritu de moderación y avenencia, todos debían aunar sus esfuerzos para buscar la base de la unidad en Arabia Meridional y marchar hacia la independencia nacional con apoyo pleno de las Naciones Unidas. Era lamentable el terrorismo en la región, y su cesación era un paso esencial en la marcha ordenada hacia la independencia, que debía alcanzarse con espíritu de armonía y buena voluntad y sin violencia. Cuando se trabajaba para crear un país era importante que hubiera un ambiente basado en la fe, la confianza y la estabilidad. Las Naciones Unidas debían hacer todo lo posible para ayudar a crear ese ambiente.

126. El representante de Túnez declaró que las resoluciones de las Naciones Unidas iban dirigidas ante todo a la Potencia administradora y no al llamado Gobierno federal. Sólo el Reino Unido tenía el poder necesario para aplicar esas resoluciones y no podía ser reemplazado por el Gobierno de la Federación. Su delegación apoyaba el informe del Subcomité y esperaba que el Reino Unido cumpliera las resoluciones de las Naciones Unidas y permitiera una visita a Adén. El Secretario General debía continuar adoptando las medidas que estimara oportunas para asegurar el cumplimiento de la resolución 2023 (XX) y tomar las providencias necesarias para que hubiera una presencia efectiva de las Naciones Unidas en Adén.

127. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que el anuncio reciente del Gobierno federal, calificado de iniciativa importante por el Reino Unido, era en realidad un acto inútil. Sólo el Gobierno del Reino Unido tenía autoridad para hablar sobre la cuestión de Adén en las Naciones Unidas. Ese Gobierno no había formulado ninguna declaración precisa sobre si aceptaba y aplicaba las resoluciones de la

Organización. Los soldados del Reino Unido continuaban en Adén y el Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY), que representaba al pueblo del Territorio, seguía proscrito. La Conferencia constitucional no sería, pues, plenamente representativa. Se habían mencionado ciertos requisitos para que la situación progresara; esos requisitos no se cumplirían mientras continuaran las medidas represivas contra el pueblo del Territorio. Añadió que su delegación convenía en que la presencia de las Naciones Unidas era necesaria; el Reino Unido debía permitir que el Subcomité de Adén visitara el Territorio.

128. El Subcomité había tomado nota con preocupación de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no había contestado, y el Sr. Foun apoyaba la propuesta de la Unión Soviética sobre el particular.

129. El informe del Subcomité, que debía ser apoyado por todos los que deseaban un progreso real en Adén, debía ser aprobado como medida provisional.

130. El representante de Etiopía manifestó que el Comité Especial debería aprobar inmediatamente el informe del Subcomité. La propuesta del representante de la Unión Soviética quizás estaba comprendida en la recomendación que figuraba en el inciso v) del párrafo 17 del informe.

131. El representante de Bulgaria apoyó las conclusiones y recomendaciones del Subcomité. La aceptación por el Gobierno federal de las resoluciones de las Naciones Unidas no significaba nada, pues esas resoluciones iban dirigidas a la Potencia administradora y eran contrarias a la existencia de la Federación. Era extraño que el Gobierno del Reino Unido expresara sus propias opiniones a través de la voz de un Gobierno títere de su propia creación. La declaración del Reino Unido no daba una respuesta clara a la pregunta de si estaba dispuesto a cumplir las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Dados los peligrosos acontecimientos de Adén y la respuesta negativa del Reino Unido, el Comité Especial debería reiterar las disposiciones pertinentes de las resoluciones de las Naciones Unidas y recalcar que el Gobierno del Reino Unido era el encargado de aplicarlas y de encaminar el Territorio hacia la independencia conforme a los deseos de la población expresados libre y democráticamente.

132. No bastaba con que los organismos especializados tomaran nota de los llamamientos que se les habían dirigido sino que debían dar cuenta clara de lo que estaban haciendo para cumplirlos.

133. El representante de la India respaldó las recomendaciones del párrafo 17 del informe del Subcomité, que debería ser aprobado inmediatamente. La recomendación del inciso v) era particularmente importante.

134. El representante de Australia dijo que había tres factores importantes en la situación que se examinaba: la reiterada intención del Reino Unido de retirarse de Adén y de la base para 1968; el anuncio del Gobierno federal de que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional y la actitud del Reino Unido con respecto a dicho anuncio. La situación, que cada día era menos una situación colonial y más una cuestión de ajuste de diferencias entre diversos grupos árabes, debía ser encarada con suma cautela.

135. Aunque la situación seguía siendo agitada, habían aparecido signos nuevos y alentadores. No se debería obstruir el progreso con medidas precipitadas e inconsultas, y había que pesar cuidadosamente las declaraciones recientes. Añadió que su delegación no estaba, pues, en condiciones de adoptar una decisión trascendental sobre la cuestión de Adén. Con esas reservas apoyaría la aprobación del informe del Subcomité.

136. La representante de Madagascar indicó que apoyaría las recomendaciones contenidas en el informe que era un complemento necesario del informe del Secretario General (anexo I) y las declaraciones de la delegación del Reino Unido.

137. El representante de Polonia dijo estimar que el informe no planteaba cuestiones que suscitaran controversias. La Potencia administradora no tenía ninguna duda sobre la opinión del Comité Especial acerca de la condición jurídica del Gobierno del Territorio, donde los acontecimientos estaban siguiendo un curso análogo al seguido en Rhodesia del Sur. El único camino razonable era el indicado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que se dirigían exclusivamente al Reino Unido. No podía haber ningún progreso hacia la independencia en el Territorio mientras el Reino Unido no aceptara sus responsabilidades y aplicara las resoluciones de las Naciones Unidas. Las medidas que habrían de tomarse se enumeraban en el párrafo 17 del informe del Subcomité, que el Comité debía aprobar.

138. El representante de Polonia apoyaba las observaciones del representante de la Unión Soviética acerca de la respuesta de los organismos especializados a los llamamientos que se les habían dirigido.

139. El representante del Reino Unido manifestó que al comentar el informe del Subcomité se refería a muchas de las cuestiones suscitadas por los oradores que le habían precedido, pero sin tratar de ocuparse en sus declaraciones en detalle. La delegación del Reino Unido deploraba la aparente incapacidad de algunos oradores de aprovechar las oportunidades que ofrecían los recientes acontecimientos y su tendencia a refugiarse en viejas y desacreditadas acusaciones que no guardaban relación con las nuevas realidades y traducían su renuencia a avanzar con la corriente del momento.

140. Algunos miembros del Comité parecían creer que la decisión del Gobierno federal de aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas como base para una solución general que llevara a la independencia no venía al caso y que lo único que interesaba era saber si el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a aceptar y aplicar esas resoluciones. Su Gobierno, desde luego, era parte importante en todas las discusiones y decisiones principales que afectarían a Arabia Meridional y, como Potencia administradora, era responsable por cuestiones como la fecha de la independencia y la forma en que debía alcanzarse. Sin embargo, su Gobierno no podía tomar decisiones unilaterales e imponerlas en toda Arabia Meridional. Un principio básico de la política colonial del Reino Unido, aceptado generalmente en las Naciones Unidas, era el de que la transferencia del poder era un proceso gradual; la autoridad legal y el poder político real eran primero compartidos y luego transferidos y, cuando la independencia estaba cercana, las principales decisiones que afectaban al porvenir del territorio interesado estaban

en manos del gobierno y el pueblo del país. Esta era una característica básica del principio de libre determinación. En ese momento no debieran plantearse cuestiones como la de si un determinado gobierno o grupo era o no plenamente representativo, ya que todos estaban de acuerdo en que las decisiones principales sobre Arabia Meridional debían ser adoptadas por todos los partidos, grupos y gobiernos del país, en una conferencia plenamente representativa que llevase a las elecciones en toda la nación.

141. Este procedimiento respondía no sólo al principio de libre determinación y a la política del Reino Unido, sino también a su posición jurídica y constitucional. La autoridad directa del Gobierno del Reino Unido en el Protectorado de Arabia Meridional fuera de Adén se limitaba a cuestiones de defensa, asuntos externos y administración pública. Por lo tanto, las decisiones e intenciones del Gobierno federal, que ejercía la autoridad real sobre muchas cuestiones, también tenían importancia decisiva desde el punto de vista jurídico. Adén era parte de la Federación y todos en el Territorio y en las Naciones Unidas estaban de acuerdo en que el porvenir de Adén estaba ligado al porvenir de Arabia Meridional. En todo caso, conforme a la Constitución federal muchos de los aspectos más importantes de la administración de Adén, incluso la seguridad interna, eran de competencia del Gobierno federal. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido no podía aceptar que la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas fuera un asunto que había de resolverse entre las Naciones Unidas y el Reino Unido únicamente, o que — como se afirmaba en el informe del Subcomité — el Gobierno federal careciera de autoridad en la materia. El Comité recordaría la declaración que el ex representante del Irak formuló el 22 de octubre de 1965, en la 1535a. sesión de la Cuarta Comisión. Dijo entonces que esas cuestiones no podía decidir las desde lejos la Potencia administradora, sino que debían decidirse localmente a base de adecuados procedimientos consultivos, y pidió la convocación de una conferencia en la que estuviesen representadas todas las diferentes opiniones en el Territorio.

142. La aceptación de las resoluciones de las Naciones Unidas por casi todos los representantes de las distintas opiniones en Arabia Meridional exigía que cierto número de los diferentes partidos y autoridades adoptaran diversas medidas. Las declaraciones formuladas el 16 de mayo por el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y por el Representante Permanente del Reino Unido en la sesión anterior (véanse párrs. 101 a 103 *supra*) mostraban que la actitud de su Gobierno con respecto a esos aspectos de las resoluciones era enteramente positiva. Las reservas que tenía se referían al momento oportuno de la aplicación y no al principio, pero el factor tiempo era importante y la aplicación en algunos aspectos dependía inevitablemente de la cesación del terrorismo y la subversión, que eran inútiles y contraproducentes.

143. El Representante Permanente del Reino Unido había puntualizado que su Gobierno aceptaba cualquier solución del problema constitucional que permitiera llegar a un acuerdo amplio en el Territorio, y aceptaba las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre las elecciones a un órgano representativo y el establecimiento de un gobierno provisional para toda Arabia Meridional. Otros ejemplos de la forma práctica en que el Gobierno del Reino Unido había de-

mostrado su aceptación de las resoluciones de las Naciones Unidas se hallaban en sus decisiones relativas a la evacuación de la base y al regreso de los desterrados. Además, el Reino Unido había expresado repetidas veces que estaba dispuesto a aplicar las disposiciones relativas al estado de emergencia y a los detenidos tan pronto como hubiese pruebas satisfactorias de que había terminado el terrorismo. El Reino Unido celebraba la propuesta del Gobierno federal de que un observador de las Naciones Unidas asistiera a la conferencia, como también la propuesta acerca de la presencia de las Naciones Unidas antes de las elecciones y durante éstas. Antes de la conferencia — que había de empezar el 1º de agosto — el Representante Permanente del Reino Unido consultaría con el Secretario General para determinar si había otras medidas que adoptar para lograr la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General, como se pedía en la resolución misma.

144. La decisión anunciada por el Gobierno federal representaba un verdadero esfuerzo para avanzar conforme a las ideas preconizadas por las Naciones Unidas y, como tal, merecía una buena acogida. Era entonces importante que todos los que en Arabia Meridional tuviesen verdadero interés en que se llegase a una solución dentro de la estructura constitucional de las resoluciones de las Naciones Unidas se consultaran entre sí sobre la forma en que podría lograrse ese objetivo. La conferencia que se proponía respondía claramente a ese fin y el Gobierno del Reino Unido esperaba sinceramente que todas las partes interesadas participarían en ella.

145. La visita del Subcomité a Adén era una cuestión separada e insistir en aquel momento en ella no contribuiría a resolver sin fricciones los problemas propios de la nueva situación creada por la decisión del Gobierno federal. Toda la cuestión de esa visita era, de todos modos, un aspecto de cuestiones más amplias que indudablemente se examinarían en la conferencia propuesta.

146. La delegación del Reino Unido no opondría ninguna objeción formal a la aprobación del informe del Subcomité si así lo deseaba el resto del Comité Especial. Como gran parte del informe se refería a recomendaciones dirigidas a su Gobierno sobre las cuales no había tenido oportunidad de solicitar instrucciones, el orador las transmitiría a su Gobierno si fuesen aprobadas. Entre tanto, el representante del Reino Unido tenía que reservar la posición de su Gobierno sobre el informe.

147. El representante del Irak, hablando en ejercicio de su derecho a responder, dijo que, en la declaración a que se refirió el representante del Reino Unido, el representante de Irak había abogado en efecto por la convocación de una conferencia, pero que su delegación y las Naciones Unidas entendían que la conferencia debía ser organizada no por el Gobierno federal sino por las Naciones Unidas mismas y que el Reino Unido asumiría su responsabilidad especial como Potencia administradora.

148. El representante del Reino Unido había dicho que la autoridad directa del Gobierno de su país en el Protectorado de Arabia Meridional fuera de Adén se limitaba a la defensa y a los asuntos externos y que hasta la seguridad interna de Adén era de competencia del Gobierno federal; esto era incompatible con su

afirmación de que su Gobierno estaría dispuesto a poner fin al estado de emergencia y a dejar en libertad a los detenidos cuando hubiese pruebas satisfactorias de que había terminado el terrorismo.

149. El representante del Reino Unido había dicho que la independencia debía alcanzarse gradualmente. Todos los que se oponían al colonialismo sabían lo que esa fórmula significaba verdaderamente; además, en su resolución 2023 (XX) la Asamblea General encarecía al Reino Unido que procediera "inmediatamente" a aplicar ciertas medidas importantes. El representante de Australia había dicho que el problema consistía fundamentalmente en ajustar diferencias entre varios grupos árabes; pero lo cierto era que todos los árabes estaban de acuerdo en que la independencia debía darse inmediatamente y no en 1968. El orador celebraba las observaciones del representante del Reino Unido acerca de las consultas del Representante Permanente con el Secretario General y sobre la presencia de las Naciones Unidas en la conferencia, así como antes de las elecciones y durante éstas, pero la delegación del Reino Unido no debería olvidar que también correspondía una función al Comité Especial y al Subcomité de Adén. Añadió que apoyaba las propuestas de la URSS y de Etiopía.

150. El representante del Irán reafirmó que a juicio de su delegación la Potencia administradora debería adoptar las medidas previstas en las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, con miras a celebrar elecciones que culminaran con el establecimiento de un gobierno verdaderamente representativo que gozara de la confianza y el apoyo de todos los pueblos del Territorio. Dijo que apoyaría la aprobación del informe del Subcomité si quedaba entendido que las cuestiones de fondo serían examinadas plenamente en otra sesión.

151. El representante de los Estados Unidos de América no se oponía a la aprobación del informe que se acaba de recibir, pero expresó la reserva de su delegación.

152. El representante de Italia apuntó que su delegación no había tenido tiempo para estudiar el informe pero apoyaría su aprobación reservando su derecho a formular comentarios sobre el mismo en el momento oportuno. Convino con el representante de Dinamarca en que los últimos acontecimientos en Adén, especialmente la aceptación de una presencia de las Naciones Unidas y la convocación de una conferencia constitucional, constituían augurios muy felices.

153. El Comité Especial aprobó el informe del Subcomité (anexo II) e hizo suyas las recomendaciones contenidas en su párrafo 17, en la inteligencia de que las reservas expresadas por los miembros aparecerían en el acta de la sesión.

E. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

154. El Comité Especial consideró la cuestión de Adén en sus 431a., 436a. y 441a. a 447a. sesiones, celebradas en Africa entre el 3 y el 15 de junio de 1966.

155. En conformidad con lo dispuesto en la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, el 9 de

junio de 1966 el Secretario General presentó al Comité Especial otro informe sobre la cuestión de Adén (véase el anexo III). El Comité Especial también tuvo ante sí una carta, de fecha 17 de mayo de 1966, del Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la que transmitía el texto de una declaración sobre Arabia Meridional, formulada en la Cámara de los Comunes por el Secretario de Relaciones Exteriores (véase el anexo IV).

156. En su 441a. sesión, celebrada en El Cairo, el Comité Especial recibió una carta, de fecha 11 de junio de 1966, del Subsecretario de Relaciones Exteriores de la República Árabe Unida (A/AC.109/181) en la que éste pedía que se le autorizase a participar en los debates del Comité relativos a Adén y a la Arabia Meridional. El Comité Especial decidió sin objeciones acceder a esa petición. También asistió a los debates que sobre esta cuestión se celebraron en El Cairo el Sr. Omar A. H. Adeel, representante Especial del Secretario General para la cuestión de Adén (véase el anexo III).

Peticiones escritas y audiencias

157. El Comité Especial tuvo ante sí las siguientes peticiones escritas relativas a Adén:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Diecinueve estudiantes árabes de la Universidad de Oklahoma	A/AC.109/PET.426
Nueve "Ministros del Gobierno [de Adén] suspendidos por las autoridades británicas"	A/AC.109/PET.443
Sr. Hasson I. K. Khan y otros..	A/AC.109/PET.443/Add.1
"Ex ministros y ex miembros del Consejo Legislativo"	A/AC.109/PET.443/Add.2
Comité Directivo de la Asociación de Funcionarios Civiles de Arabia Meridional	A/AC.109/PET.444
Congreso de Graduados	A/AC.109/PET.445
Sr. A. M. Nasser, Presidente del Congreso de Graduados de Adén	A/AC.109/PET.445/Add.1
Sr. Mohamed Awad Bin Ladin y otros "en nombre de los hijos del pueblo de Hadramout residentes en Arabia Saudita" ..	A/AC.109/PET.454
Sr. Faisal El-Haji, Presidente de la National Union of Kuwaiti Students	A/AC.109/PET.466
"Familias de los detenidos".....	A/AC.109/PET.467
Unión de Estudiantes de Adén...	A/AC.109/PET.468
Sr. Abdul Qawi Mackawee, Secretario General del Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY)	A/AC.109/PET.469 y Add.1
Presidente y miembros del Consejo Municipal de Adén	A/AC.109/PET.470
Dos peticiones de la Occupied South Arabian Community en Somalia	A/AC.109/PET.478
South Arabian League (SAL) ..	A/AC.109/PET.480
Sr. Muhammed Ali Al-Gifri, Presidente de la South Arabian League (SAL)	A/AC.109/PET.480/Add.1
"Hijos de la Arabia Meridional de Giamama", Somalia	A/AC.109/PET.482
Sr. O. A. Bamahsoon, Secretario de la South Arabian Students Organization (SASO)	A/AC.109/PET.486

*Peticionario**Signatura del documento*

Sr. Mohamed Almed Nesf El-Leil, Vicepresidente de la Bihan Youth	A/AC.109/PET.487
Sr. Hussein Omar Ben-Sahl, Presidente de la South Arabia Youth Organization	A/AC.109/PET.488
Sr. Elwi Omar Ahmed, Representante de la Youth of Bathina in South Arabia	A/AC.109/PET.489
Sr. Ahmed Abdel Hamid en nombre del Youth Club de la Sultania de Lahej, de Arabia Meridional	A/AC.109/PET.490
Sr. Abu Bakr Mohamed Farid Al-Aulaqi, Secretario de la Al Awalek Youth Union, El Cairo	A/AC.109/PET.491
Sr. Abdel Wahab Abdel Wali, Representante de la Subbeih Association	A/AC.109/PET.492
Sr. El Sayed Ali Mohamed El Saqqaf, Presidente de la Arab Arts Association	A/AC.109/PET.493
Sr. Abdullah Abd Rabbo Al-Aulaqi, Representante de los Hijos de Arabia Meridional en Kuwait	A/AC.109/PET.494
Sr. Awad Abdulla Arashani en nombre de los estudiantes del Yemen Meridional en El Cairo	A/AC.109/PET.496
Sr. Mohamed Abdullah Ogeil, Presidente de la Salvation Organization de Adén	A/AC.109/PET.497
Sr. Said Bin Issa Al-Amoudi, Representante de los Hijos de la Arabia Meridional en Hyderabad, India	A/AC.109/PET.498
Sr. Ali A. R. Aswadi, Vicepresidente del Aden Trade Union Congress (ATUC)	A/AC.109/PET.499
Sr. Abdulla Bakerman, Representante del Arab Socialist Party of Hadramout	A/AC.109/PET.504
Congreso de Graduados, Asociación de Mujeres Arabes, Asociación de Comerciantes Arabes y Organización de Pioneros Arabes	A/AC.109/PET.505
Liga de Estudiantes Arabes, Belgrado	A/AC.109/PET.506
Movimiento de Pioneros Socialistas	A/AC.109/PET.507
Asociación de Mujeres Arabes ..	A/AC.109/PET.508

158. El Comité Especial concedió audiencia a los siguientes peticionarios con respecto a Adén:

Sr. Yislam S. Naashir, de la Occupied South Arabian Community in Somalia, acompañado por el Sr. Addaini, el Sr. Alyafa, el Sr. Bamakhramah y el Sr. Bin-Gidnan	(431a. sesión)
Sr. Mohamed S. Bawazir de la South Arabian League, acompañado por el Sr. Jamil Y. Abdul Galil	(436a. sesión)
Sr. Abdul Qawi Mackwee, Secretario General del Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY), acom-	

pañado por el Sr. Salami, el Sr. Magli y el Sr. Urregi	(441a. y 442a. sesiones)
Sr. Muhammed Ali Al-Gifri, Presidente de la South Arabian League	(442a. y 443a. sesiones)
Sr. Ali A. R. Aswadi, Vicepresidente del Aden Trade Union Congress (ATUC)	(444a. sesión)
Sr. Abdullah A. R. Al-Aulaqi, representante de la South Arabian Community in Kuwait ..	(444a. sesión)
Sr. Mohamed A. Ogeil, Presidente de la Salvation Organization in the South Yemen and Aden Protectorate	(444a. sesión)
Sr. Hussein Omar Ben-Sahl, Presidente de la South Arabia Youth Organization	(444a. sesión)

159. El Sr. Naashir dijo que la Comunidad de Arabia Meridional Ocupada en Somalia (Occupied South Arabian Community in Somalia) (OSACS), que comprendía unas 25.000 personas, estaba dispuesta a continuar su lucha por todos los medios posibles, a fin de lograr la libertad e independencia de su país. Estaba convencida de que tenía derecho a llevar una vida libre y digna, elegida por ella misma, a colaborar con sus hermanos que aún se hallaban bajo el yugo del imperialismo británico en la Arabia Meridional, y a adherirse a los altos principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.

160. Conforme a esos objetivos, la Comunidad había aprobado una resolución el 27 de mayo de 1966. Dicha resolución merecía un examen favorable, pues atañía al destino de un pueblo entero y a un problema cuya solución sería muy conveniente para el fomento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la Arabia Meridional.

161. En esa resolución la Comunidad declaraba que se adhería a la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, aprobada el 5 de noviembre de 1965, referente a la Arabia Meridional ocupada, y hacía un llamamiento a todos los Estados Miembros libres para que adoptaran las medidas necesarias a fin de poner en vigor la citada resolución; subrayaba la necesidad imperiosa de la inmediata evacuación de las fuerzas británicas en la base de Adén, y de la expulsión completa de los imperialistas de la Arabia Meridional; rechazaba enérgicamente las propuestas constitucionales presentadas por las autoridades del Reino Unido y expresaba su oposición a la idea de la constitución de una república de la Arabia Meridional basada en tales propuestas; condenaba las tentativas imperialistas encaminadas a desintegrar su patria haciendo que los Protectorados orientales (Qaaiti, Kathiri y Mahra) se separaran de la Arabia Meridional, y confirmaba que constituía un pueblo único perteneciente a una nación indivisible; censuraba las tentativas imperialistas de atemorizar a los habitantes de los Protectorados orientales mediante la disolución del ejército nómada; hacía un llamamiento a la conciencia mundial para que hiciera todo lo posible a fin de eliminar la represión política y el terrorismo militar que reinaban en la Arabia Meridional ocupada, y frustrar los planes imperialistas encaminados a mantener a esa zona bajo dominación británica; declaraba que sólo había un frente representativo de todos los ciudadanos de la Arabia Meridional,

esto es el Occupied South Arabian Liberation Front, el cual se había granjeado la confianza y el apoyo absoluto de tales ciudadanos, y declaraba además que carecía de valor todo acuerdo concertado con cualquier otro órgano político; confirmaba que la OSACS se hallaba dispuesta a no reconocer ningún acuerdo concertado entre las autoridades gubernamentales de la zona y las autoridades británicas, ni entre cualquiera de estas partes y los supuestos dignatarios del país o los llamados jefes de tribus; expresaba su oposición enérgica a las conversaciones políticas entre los jefes de los nómadas o los jefes de tribus y cualquier gobierno reaccionario o cualquier oportunista; reivindicaba el derecho de libre determinación; y apoyaba cabalmente a la República Somalí en sus justas reivindicaciones encaminadas a la restitución de los territorios ocupados y a la consecución del derecho de libre determinación para los nacionales que se hallaban bajo dominio extranjero.

162. En contestación a varias preguntas dijo que si bien el Gobierno de la Federación había declarado que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la Arabia Meridional, no se había hecho nada para aplicarlas, a pesar de los deseos de la población del país. La represión política existía en toda la Arabia Meridional, pero en Adén la población se hallaba particularmente a merced de las autoridades del Reino Unido, ya que este país gobernaba directamente la ciudad. Los combatientes de la libertad luchaban sobre todo en las montañas.

163. La base de Adén no sólo se empleaba contra la población local sino para atemorizar a otros países árabes vecinos. Conforme al principio de "divide y vencerás", la Potencia administradora trataba de romper la unidad del pueblo de la Arabia Meridional para impedir que consiguiera sus derechos legítimos. Los ciudadanos del Territorio no podían visitar ciertas zonas, donde se creía que se estaban estableciendo bases. A fin de prolongar hasta donde fuera posible su permanencia en el Territorio, la Potencia Administradora procuraba reforzar la posición de los títeres del imperialismo para dar la sensación de que eran los verdaderos gobernantes del país.

164. Sólo había un frente de liberación de Arabia Meridional, representativo de toda la población del Territorio, y en él había depositado su confianza la población. Este era el partido del peticionario. Todos los partidos se habían fusionado en la Comunidad de Arabia Meridional Ocupada en Somalia.

165. El Sr. Bawazir dijo que la South Arabian League (SAL), el partido político más importante de Arabia Meridional, daba las gracias a las Naciones Unidas y al Comité Especial por su interés y sus esfuerzos, y al Gobierno y al pueblo de Etiopía por su hospitalidad.

166. Los representantes de la SAL habían presentado ya sus opiniones sobre la situación en la Arabia Meridional al Comité Especial y a la Asamblea General, y ambos habían adoptado cierto número de resoluciones recomendando la concesión de la independencia y la completa unidad de Arabia Meridional, así como el traspaso de los poderes al pueblo de ese territorio para la creación de una asamblea representativa libremente elegida. Era de lamentar que, no obstante la resolución sobre Arabia Meridional aprobada por la Asamblea General el 5 de noviembre de 1965, la situa-

ción en el Territorio siguiera siendo la misma. El Gobierno del Reino Unido, que era el único facultado para aplicar la resolución bajo vigilancia de las Naciones Unidas, no lo había hecho así, a pesar de que la resolución había sido aceptada en general por todos los interesados. El Gobierno federal había enviado invitaciones a una conferencia que debía celebrarse en agosto de 1966 a fin de estudiar los medios para aplicar la resolución. Pero las Naciones Unidas habían pedido al Gobierno del Reino Unido, y no al Gobierno federal, que aplicara la resolución. En nombre de Arabia Meridional el peticionario pedía, pues, que el Gobierno del Reino Unido aceptara y aplicara la resolución y que se invitara a las Naciones Unidas a hacer presión sobre el Gobierno del Reino Unido en ese sentido. La demora sólo podría provocar un conflicto sangriento, cuya víctima sería la población de Arabia Meridional. Esa situación podría poner en peligro a su vez la paz mundial, y las Naciones Unidas se encontrarían con otra crisis que podría exigir la intervención del Consejo de Seguridad.

167. El estado de emergencia, declarado en Arabia Meridional el 10 de diciembre de 1963, continuaba existiendo. Las prisiones estaban llenas de detenidos políticos y millares de árabes del sur estaban en exilio en Adén, donde estaba prohibido el acceso a muchos sectores y se había convertido en un campo militar al servicio del ejército británico. Los árabes del sur vivían en estado de guerra, y en ninguna parte se veían trazas de democracia o libertad. El Reino Unido no había hecho nada para crear instituciones verdaderamente representativas ni para llevar a Arabia Meridional hacia la independencia y la había mantenido dividida en todos los planos. Su ejército, por ejemplo, era débil y estaba fragmentado en unidades colocadas bajo mandos diferentes. Como Autoridad Administradora el Reino Unido había llegado a no permitir que se reclutaran árabes calificados egresados de escuelas militares de los países árabes.

168. El peticionario declaró que la presencia de las Naciones Unidas sería necesaria en Arabia Meridional tanto antes como después de las elecciones, y rogó encarecidamente al Comité Especial que continuara apoyando al pueblo de Arabia Meridional en sus esfuerzos para lograr la unidad y la independencia.

169. En contestación a varias preguntas dijo que su partido y el Front perseguían los mismos objetivos y querían que se hiciera efectiva la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General. Todos los grupos interesados de Arabia Meridional reivindicaban la independencia.

170. Había desempleo en toda Arabia Meridional. En los protectorados había desempleo en masa en el interior, y en Adén había algunos millares de personas sin empleo porque no existían fábricas ni empresas comerciales. Aunque el Reino Unido había ocupado Adén durante 125 años, no había instituido escuelas ni universidades que prepararan a los árabes para la función pública. Adén confiaba en la ayuda de las Naciones Unidas.

171. Desde el 10 de diciembre de 1963 las tropas británicas sometían sin cesar a la población local a restricciones y controles de diversa índole. Los sospechosos eran detenidos e internados en campos especiales. Había habido también incursiones aéreas sobre el emirato de Dhala.

172. El peticionario afirmó que, en realidad, todos los habitantes de los protectorados eran miembros del

SAL o partidarios de él. En Adén, el SAL tenía alrededor de 20.000 miembros, la mayoría de los cuales eran funcionarios que las presentes restricciones no autorizaban a intervenir en las actividades políticas.

173. El Gobierno federal había sido impuesto a la población en 1959 y era muy impopular. El Gobierno federal, sin embargo, había aceptado la resolución de las Naciones Unidas; pero al Gobierno del Reino Unido era a quien correspondía en primer lugar anunciar que aceptaba esa resolución, que le tocaba más directamente que al Gobierno federal. Su organización consideraba que el Reino Unido era responsable por la situación en Arabia Meridional. El Gobierno federal, que representaba sólo una cuarta parte del Territorio, había enviado invitaciones para asistir a una conferencia que debía comenzar el 1° de agosto de 1966, pero había pasado por alto a las otras tres cuartas partes del Territorio. El Estado de Quaiti y la Sultanía de Mahra habían sostenido que las resoluciones de las Naciones Unidas sólo se referían al Reino Unido y que si el Reino Unido les invitaba enviarían representantes a la conferencia.

174. El Sr. Mackawee, hablando en nombre del Front for the Liberation of the Occupied South Yemen (FLOSY), expresó su reconocimiento por todos los esfuerzos desplegados por el Comité Especial para ayudar a los pueblos que luchaban por su libertad en Arabia Meridional, en Adén, en los Protectorados oriental y occidental y en las Islas de Perim, Kuria Muria, Kamaran y otras islas litorales. Los límites geográficos del Territorio definidos en conformidad con la resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1965, venían preocupando a la Organización desde 1952.

175. La lucha de su pueblo contra la dominación extranjera y contra el gobierno títere — respaldado por el Gobierno del Reino Unido en colusión con los sultanes y jeques y conocido como la Federación de Arabia Meridional — contaba con el apoyo de los habitantes y había obligado al régimen gobernante a modificar sus tácticas. El FLOSY representaba a la población de la zona y, por consiguiente, deseaba señalar a la atención del Comité Especial la evolución registrada en la situación con posterioridad a la aprobación de las resoluciones de las Naciones Unidas.

176. A partir del 10 de diciembre de 1963 habían entrado en vigor reglamentaciones de emergencia que se habían caracterizado por arrestos, registros y saqueos. Durante el año pasado fuerzas del ejército del Reino Unido habían rodeado distritos enteros más de diez veces y habían tenido presas a personas hasta tres meses sin que hubiera mediado juicio. Las incursiones y bombardeos aéreos habían dejado sin hogar a 130.000 mujeres, niños y ancianos. Los niños de Raifan, Dhala, Yafei y Haushabi fueron privados de enseñanza y atención médica. El informe de testigos oculares presentado después de la visita de los trabajadores argelinos, jordanios y árabes de la Media Luna Roja, constituía una prueba de la trágica situación.

177. Continuaban en vigencia leyes represivas, tales como la *Industrial Relations Law* de 1960, y las penas habían sido aumentadas al doble, con terribles consecuencias para los trabajadores y los estudiantes. Los periódicos habían sido amenazados con el retiro de sus licencias en caso de publicar artículos en los que no se dejara bien a los sultanes o a la Federación.

178. El National Liberation Front (NLF), la Organization for the Liberation of the South (OLOS) y muchas otras organizaciones independientes, unidas bajo el estandarte del National Liberation Front con el apoyo de la Liga Árabe, instaba al Comité Especial a tomar nota de que la Potencia Administradora no cumplía totalmente las resoluciones de las Naciones Unidas y a utilizar medios enérgicos para obtener su cumplimiento. El Gobierno del Reino Unido había promovido la aceptación de las resoluciones por parte de la Federación sólo después de haberse ejercido presión mediante la escalación de las actividades nacionalistas, después de haber iniciado actividades el FLOSY para establecer un gobierno nacionalista provisional, y después de haberse conocido el amplio apoyo al movimiento. La aceptación de la Federación había sido rechazada por el Comité Especial, que había basado su negativa en que el Reino Unido tenía la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas. En 1965, el FLOSY había anunciado que apoyaba todas las resoluciones de las Naciones Unidas y había pedido que se les diera inmediato cumplimiento. Las pruebas necesarias para justificar este pedido habían sido proporcionadas por el Sr. Harold Wilson antes de ocupar el cargo de Primer Ministro del Reino Unido, por el representante de la Unión Soviética (A/AC.109/SR.333) y por el representante del Reino Unido (A/AC.109/SR.335). El Reino Unido no había anunciado su aceptación incondicional de las resoluciones de las Naciones Unidas ni había autorizado al Comité Especial a escoger las mejores medidas para darles cumplimiento; en cambio, había insistido en realizar negociaciones con el Gobierno federal títere, lo que era un medio de soslayar las resoluciones. Los sultanes que habían expresado su adhesión a las resoluciones, al hacerlo manifestaron su alineamiento con la Potencia administradora, que trató de que se les reconociera como gobierno *de facto*.

179. El Ministro de Información y Educación del llamado Gobierno federal había declarado en Beirut, donde se encontraba en camino hacia Londres para asistir a la Conferencia, que no discutiría ninguna cuestión relativa a la defensa. Ahora bien, a su llegada, había dicho que estaba autorizado para declarar que la verdadera actitud del Gobierno federal era la que se expresaba en una carta enviada por el Sultán Saleh a Lord Beswick. El petionario dio lectura a algunos pasajes de dicha carta, en los que se decía que había quedado convenido que el Gobierno del Reino Unido prestaría asistencia a la Federación para su defensa. La carta continuaba solicitando que, tan pronto como fuera posible, el Gobierno del Reino Unido convocara una conferencia para fijar la fecha de la independencia y concertar un acuerdo de defensa en virtud del cual el Reino Unido mantendría su base militar en Adén.

180. El FLOSY insistía en que el Reino Unido declarara su plena adhesión a las resoluciones de las Naciones Unidas y comenzara a cumplirlas; en que se derogaran las leyes de emergencia, se pusiera en libertad a los detenidos políticos y se permitiera regresar a los desterrados; en que el Reino Unido iniciara inmediatamente negociaciones con el Liberation Front y organizaran elecciones en toda la zona, bajo la fiscalización de las Naciones Unidas y sobre la base del sufragio universal directo, a fin de formar un gobierno provisional verdaderamente representativo; y en que el Reino Unido celebrara negociaciones con el Gobierno y el

Parlamento futuros en vísperas de su formación, a fin de entregar los poderes al pueblo.

181. El FLOSY pedía al Comité Especial que censurara las conversaciones de Londres como desleales a la voluntad del pueblo y a las disposiciones de las resoluciones de las Naciones Unidas; que se opusiera a toda reunión tal como la conferencia que se proponían convocar el Reino Unido y el Gobierno federal so capa de las resoluciones de las Naciones Unidas; que subrayara su censura de la Constitución actual, que había sido impuesta en 1959 contra la voluntad del pueblo, y que había sido declarada nula por la resolución de noviembre último en la que se pedía la abolición de toda institución que se opusiera a la libre voluntad del pueblo; que condenara el proyecto de constitución preparado por los expertos del Reino Unido, Bell y Hone, en tanto que la constitución para la independencia debía ser redactada por auténticos representantes del pueblo. A este respecto, el peticionario se remitió al discurso pronunciado por el representante del Irak en la 1535a. sesión de la Cuarta Comisión, celebrada el 22 de octubre de 1965, y al informe de los expertos del Reino Unido, en el que se declaraba (en el párr. 18 del texto árabe) que la Constitución existente no preveía un gobierno representativo. El Liberation Front se comprometía a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas y a ajustarse constantemente a las mismas, y estimaba que su aplicación y cumplimiento constituían una sólida base para salvaguardar los auténticos intereses del pueblo de Adén. Pedía, además, que el Comité Especial publicara una declaración provisional en la cual se condenaran las conversaciones de Londres, la propuesta conferencia de agosto, la Constitución actual y las propuestas constitucionales británicas.

182. En contestación a varias preguntas, dijo que en 1965, de los 1.200 estudiantes de Adén en condiciones de hacerlo, sólo 400 se habían matriculado en escuelas secundarias. Los servicios médicos se limitaban a un hospital del Gobierno en el Estado de Adén, que no alcanzaba para las necesidades de toda la comunidad. Por motivos incomprensibles se habían negado permisos de entrada a médicos procedentes de otros países árabes. En el interior del país las enfermedades se propagaban sin freno y eran muchas las muertes que podían atribuirse a la falta de atención adecuada. Más de 50.000 militares británicos ocupaban el 50% de la tierra arable sin pagar por ello, y la pérdida que sufría el país representaba una ganancia para el Reino Unido. Los gastos, que podrían contribuir a la economía de Adén, se destinaban a la importación de productos, con lo que se privaba de posible ganancias a los comerciantes locales. Durante sus 150 años de ocupación del país, la Potencia Administradora no había desarrollado la industria local ni el comercio; tampoco se había explotado en beneficio de la población la riqueza mineral ni los puertos con que la naturaleza había dotado a la región.

183. Pidió que se enviara inmediatamente a Adén una misión de las Naciones Unidas — y no solamente un observador — para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas antes, durante y después de las elecciones populares. Si se celebrase una conferencia, ésta debería hacer preparativos para las elecciones y no limitarse simplemente a determinar medios y procedimientos para dar cumplimiento a las resoluciones del Comité Especial o de las Naciones Unidas.

184. La aceptación por el Gobierno federal de la resolución de las Naciones Unidas de 5 de noviembre de 1965 equivalía de hecho a diluirla. Había tres partes en la cuestión: el pueblo, representado por el Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY), las Naciones Unidas, y el Gobierno del Reino Unido como Potencia Administradora. El supuesto Gobierno actual no representaba a nadie más que a sí mismo, ya que no tenía mandato del pueblo para hablar en su nombre. La idea de un observador que representara al Secretario General constituiría una violación total de la resolución de las Naciones Unidas, que pedía claramente una misión de las Naciones Unidas en la región. El peticionario no consideraba que fuera necesaria una conferencia en este momento, aunque la necesidad podía surgir posteriormente, cuando la Potencia Administradora hubiera aceptado plenamente la resolución de las Naciones Unidas, hubiera interrumpido sus actos represivos y hubiera liberado a todos los presos políticos. La solución de las cuestiones constitucionales y la entrega de la soberanía al pueblo no podían realizarse hasta que se hubieran celebrado elecciones bajo la supervisión de la misión de las Naciones Unidas. La cuestión de estudiar la forma de poner en práctica la resolución de las Naciones Unidas no era una cuestión que correspondía al Gobierno federal, sino que debía discutirse entre las Naciones Unidas y los representantes reales del pueblo.

185. Al mostrarse partidario de la celebración de una conferencia el Gobierno del Reino Unido deseaba asegurarse de que sus amigos, con los que tenía intereses comunes, ocuparan puestos oficiales. A este fin, los participantes en la conferencia habían sido ya "comprados" por el Gobierno del Reino Unido. Deseaba además que la conferencia sancionara las propuestas constitucionales formuladas por los dos expertos del Reino Unido que habían visitado Adén. Si se hiciera esto, las elecciones se celebrarían únicamente en el Estado de Adén y no en el interior del Territorio, donde se celebrarían elecciones indirectas por conducto de los jefes tribales. El resultado sería que dos tercios aproximadamente de las personas elegidas serían sultanes que representaban los intereses del Gobierno del Reino Unido. Además, se nombraría a un sultán como Presidente de la República, el cual tendría derecho a nombrar al Primer Ministro. Ahora bien, tal conferencia, incluso si era impuesta por el Gobierno del Reino Unido, nunca tendría éxito. Si se traspasase la soberanía a los sultanes de la región, habría un gran derramamiento de sangre. El objetivo de las fuerzas nacionalistas en el período de 1966-1968 consistía en disolver el Gobierno federal existente, de conformidad con las disposiciones de la resolución de las Naciones Unidas aprobada en noviembre de 1965. Posteriormente, se nombraría con la aprobación del pueblo un gobierno provisional, hasta que la misión de las Naciones Unidas entrase en la región y se celebrasen elecciones. La intención del Gobierno del Reino Unido era, naturalmente, garantizar sus propios intereses y los de sus amigos tradicionales.

186. La situación se había deteriorado desde la resolución de 5 de noviembre de 1965 de las Naciones Unidas. Había unos 150.000 soldados del Reino Unido diseminados en todo el país, que aterrorizaban a la población, arrestaban a las personas sin motivo durante la noche, ejercían toda clase de presiones y, en general, creaban el caos. Esas provocaciones habían hecho

ampliar la brecha existente entre el Reino Unido y la población del Territorio. La situación no podía mejorar a menos que la Asamblea General o mejor aún, el Consejo de Seguridad adoptasen medidas para aplicar sus resoluciones. Unicamente en el Estado de Adén habían sido arrestadas 159 personas desde el 27 de agosto de 1964. Ahora bien, en la totalidad de la zona, habían sido detenidas miles de personas. A este respecto, pondría a disposición del Comité Especial dos documentos que se referían respectivamente a las personas interesadas y al tratamiento que se les había dado durante su detención⁷. El número de refugiados que se encontraban en las fronteras entre la Arabia Meridional ocupada y el Yemen ascendía a 50.000, todos los cuales recibían asistencia del FLOSY, con la ayuda material y financiera de la República Árabe Unida. Se estaba también pidiendo asistencia a otros países árabes e indudablemente se obtendría en un futuro próximo.

187. Estaba todavía en vigor la *Industrial Ordinance* y el Reino Unido se había negado hasta entonces a abolirla. Esa *Ordinance* privaba a los trabajadores del derecho de huelga, así como del derecho de negociar libremente con los empleadores. El Reino Unido estaba tratando de crear movimientos disidentes a fin de introducir disensiones en el movimiento laboral.

188. Antes de celebrar elecciones en el Territorio había que disolver los actuales regímenes títeres. El Reino Unido tendría entonces que aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas de buen grado e incondicionalmente. El peticionario señaló al respecto la declaración que había hecho el 14 de mayo el llamado Ministro de Relaciones Exteriores, anunciando que él y sus colegas continuarían en sus cargos y no los abandonarían hasta que asumiera el poder un gobierno central enteramente elegido. La declaración estaba en patente contradicción con las resoluciones de las Naciones Unidas. El FLOSY no estaba de acuerdo en que se celebraran elecciones bajo un gobierno no representativo. Antes se había obligado a votar a la gente y funcionarios del Reino Unido habían ofrecido alicientes para que se votara. El FLOSY insistía en que las elecciones se celebraran bajo la fiscalización de las Naciones Unidas, no de un representante de la Secretaría sino de una misión del Comité Especial.

189. La cuestión de la tregua entre los nacionalistas y el Reino Unido no se planteaba en esta coyuntura. Los habitantes de Arabia Meridional luchaban en defensa propia y, por lo tanto, todo consejo sobre la cesación del terrorismo debía dirigirse al Reino Unido; mal podía esperarse que los habitantes de Arabia Meridional no se defendieran. Si el Reino Unido deseaba seriamente llegar a una solución amigable, el FLOSY colaboraría de buen grado, pero, por el momento, eran evidentes las malas intenciones del Reino Unido. La lucha del pueblo no terminaría hasta que se cumplieran sus aspiraciones. El FLOSY anhelaba una solución pacífica, pero nada podía hacerse hasta que el Reino Unido aplicara las resoluciones de las Naciones Unidas.

190. El Gobierno federal era una farsa completa. El Protectorado Oriental prefería quedar fuera de la Federación, se negaba a asistir a una conferencia convocada por el Gobierno federal, que se celebraría en agosto de 1966, y había mandado una carta en que de-

cía que no la consideraba representativa. El Gobierno del Reino Unido estaba interesado en el petróleo y quería mantener sus intereses después de la independencia; por eso, trataba de mantener fuera de la Federación a varias partes del Territorio donde se había encontrado petróleo. El Reino Unido quería también mantener a Adén fuera del resto de la Federación. Podía verse obligado a conceder la independencia a Adén, dividiendo así al Territorio en tres partes, mientras que el FLOSY consideraba que debía estar unificado.

191. El FLOSY se oponía a soluciones de transacción. El Reino Unido sabía que el FLOSY tenía ciertas tendencias socialistas inadmisibles para el Reino Unido, que el FLOSY era progresista, que sólo negociaría de igual a igual e incondicionalmente, y que no admitiría ningún futuro tratado económico o político con el Reino Unido. El FLOSY quería una independencia verdadera y no falsa, como la que el Gobierno del Reino Unido trataba de imponer. El FLOSY continuaría su lucha y creía que las Naciones Unidas lo ayudarían porque su causa era justa.

192. En relación con el párrafo 12 de la parte positiva de la resolución 2023 (XX), los organismos internacionales no habían prestado ayuda a las víctimas de los ataques británicos en la región. Era necesario que se presentara un informe para saber si había habido algún progreso en la cuestión que, por su urgencia, requería una resolución que incluyera un pedido de acción inmediata. Lamentó decir que las Naciones Unidas compartían la responsabilidad de la situación, pero tenía la seguridad de que sus palabras serían bien interpretadas.

193. En cuanto al significado de las palabras "presencia efectiva" de las Naciones Unidas en el Territorio dijo que tenía la certeza de que el Comité Especial contribuiría a decidir los detalles, pero en las resoluciones de las Naciones Unidas se pide una presencia efectiva antes, durante y después de la constitución de un gobierno provisional. Había que abolir al Gobierno federal antes de considerar seriamente una presencia efectiva. Los representantes de las Naciones Unidas participarían efectivamente en todos los acontecimientos importantes, durante un período de transición hasta la independencia completa, con objeto de desbaratar cualquier maniobra del Gobierno del Reino Unido. Los observadores, por sí solos no bastaban; una presencia efectiva era lo único que alentaría la formación de un ambiente favorable y de libertad.

194. El Sr. Al-Gifri, hablando en nombre de la South Arabian League (SAL), dio la bienvenida al Comité Especial como órgano donde los pueblos oprimidos podían ventilar sus agravios y relatar la historia del colonialismo en sus países. Esos pueblos habían hallado en el Comité y en la Asamblea General de las Naciones Unidas un apoyo internacional para sus justos esfuerzos.

195. La histórica Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales había sido un punto decisivo en la lucha para eliminar los efectos del colonialismo y construir un mundo mejor, donde la humanidad disfrutara de libertad, igualdad, estabilidad y prosperidad.

196. Le complacía dirigirse de nuevo al Comité Especial habiéndolo hecho ya en El Cairo en 1963 y 1964. El secretario general de la South Arabian League (SAL) se había dirigido también al Comité en Nueva York en sus sesiones de abril-mayo de 1963 para expli-

⁷ Estos documentos han sido depositados en los archivos de la Secretaría y están a disposición de los miembros que deseen consultarlos.

car la causa de la Arabia Meridional, los verdaderos objetivos de su pueblo y la historia de la lucha de liberación de todos los sectores de la población. El peticionario había encabezado también la delegación de la SAL al debatirse el caso de la Arabia Meridional en el período de sesiones de 1965 de la Asamblea General; y uno de sus colegas, Shaikhan Abdullah Alhabshi, había hablado en nombre de la SAL ante la Cuarta Comisión, junto con representantes de otros movimientos nacionalistas de la Arabia Meridional. En aquel período de sesiones, la Cuarta Comisión había aprobado el 3 de noviembre de 1965 las resoluciones más recientes sobre la Arabia Meridional aprobadas después por la Asamblea General por abrumadora mayoría el 5 de noviembre del mismo año.

197. El pueblo de la Arabia Meridional sentía gratitud hacia el Comité Especial y el Subcomité a quienes se había confiado el estudio del caso. El Subcomité había expuesto éste con acierto y aclarado algunos puntos dudosos. Los informes, recomendaciones y sugerencias presentados al Comité nada dejaban que desear en cuanto a exactitud y claro juicio.

198. La South Arabian League se complacía mucho en ser el primer órgano de aquella región del mundo que había reconocido la importancia de las Naciones Unidas. Desde 1959 proseguía sus contactos y enviaba delegaciones a la Sede de las Naciones Unidas. Además, el memorando presentado al Comité Especial en mayo de 1962 había sido el primero preparado sobre el tema. A la SAL también le satisfacía que las pertinentes resoluciones aprobadas por el Comité y por la Asamblea General concordaran plenamente con las demandas de la Liga.

199. Las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas apoyaban las aspiraciones del pueblo de la Arabia Meridional a la independencia, la integridad territorial, la transferencia de la soberanía y del gobierno al pueblo, y la evacuación de la base británica de Adén; asimismo, incluían una serie de medidas que habían de adoptarse para garantizar el logro de estos objetivos.

200. El Reino Unido había adoptado una serie de medidas que la SAL acogía con agrado como conducentes a una solución satisfactoria para el problema de la Arabia Meridional. Esas medidas habían sido la declaración de su propósito de conceder la independencia a la Arabia Meridional para 1968, la anulación de las anteriores decisiones de deportar a nacionales de la Arabia Meridional, y su aquiescencia explícita a la completa evacuación de la base militar británica y a la inmediata retirada de las fuerzas británicas al proclamarse la independencia.

201. El pueblo de la Arabia Meridional había insistido en este último punto, ya que el mantenimiento de la base sería un obstáculo para llegar a un acuerdo aceptable. Sin embargo, el Reino Unido adoptaba una actitud incierta en cuanto a dos fines esenciales de la lucha de liberación.

202. El primero de esos fines era la integridad territorial de la Arabia Meridional, con plenas garantías frente a toda posibilidad de desmembramiento o partición. Según esto, la Arabia Meridional debía componerse de Adén, los Protectorados Oriental y Occidental, y las islas. Pero a la sazón, la Arabia Meridional estaba dividida en cinco zonas, y la SAL sospechaba que el Reino Unido tenía algo que ver con los intentos que en algunas de ellas se hacían para estorbar la unificación

de la Arabia Meridional. Si el Gobierno del Reino Unido no tenía nada que ver con esos sucesos, subsistía el hecho innegable de que algunos funcionarios británicos con influencia directa en aquella región se ocupaban en actividades que apuntaban claramente a estorbar la anhelada unidad de la Arabia Meridional. Si no se proponía realmente desmembrar al país, el Gobierno del Reino Unido debía actuar de manera que se disipara cualquier temor de que estuviera descuidando obligaciones morales e internacionales en lo que respecta a la unificación de la Arabia Meridional. La SAL temía que el Gobierno del Reino Unido se propusiera establecer una federación de las regiones de Arabia Meridional con objeto de mantener a los sultanatos y a los territorios dominados por los jeques, o una federación compuesta de tres estados miembros: Adén, el Protectorado Occidental y el Protectorado Oriental.

203. El segundo de los mencionados fines era que el pueblo obtuviera la soberanía y el derecho a empuñar las riendas del Gobierno. Las resoluciones de las Naciones Unidas habían establecido las medidas necesarias a tal efecto. Pero el Reino Unido se aferraba a lo que él llamaba los poderes o métodos tradicionales referentes a elecciones, lo cual inducía a creer que el verdadero propósito de la Potencia Administradora era ayudar a sus adictos y aliados en la Arabia Meridional para asegurarse el control del gobierno y del destino del país.

204. La actitud del Reino Unido hacia estos dos fines principales era sospechosa y su tardanza en aprobar las resoluciones de las Naciones Unidas obedecía a las reservas que abrigaba hacia ambos importantes puntos, así como a sus vacilaciones sobre la proclamación de plenas libertades públicas. La SAL se inspiraba en su creencia incommovible de que la única solución satisfactoria para los intereses del pueblo de la Arabia Meridional era que el Reino Unido se atuviera a las resoluciones de las Naciones Unidas. Aunque en los seis últimos meses se había avanzado mucho hacia una solución, subsistía el factor decisivo: la cuestión de si el Reino Unido reconocía o no las resoluciones de las Naciones Unidas y su obligación de cumplirlas.

205. En marzo de 1956, el peticionario había visitado el Yemen, que era el centro de los principales mandos y sectores de la lucha armada en la Arabia Meridional; se había celebrado una serie de pequeñas conferencias en que habían participado dichos mandos.

206. El resultado de aquellas conferencias había sido que los mandos y los sectores habían declarado su apoyo unánime a la South Arabian League en cuanto a sus objetivos políticos y sus planes de llevar a una conclusión satisfactoria la lucha nacional. El propósito político de la SAL consistía en establecer una República de la Arabia Meridional liberada y unida, con una base popular y democrática. Existía además apoyo unánime a las resoluciones de las Naciones Unidas.

207. Los mandos que intervenían en la lucha en Rolfan, Dhala, Subbeih, el Alto Yafai y el territorio del Jeque de Muflahi y Dathina, se habían unido a la SAL y habían proclamado su decisión en una declaración a la prensa. Era de notar también que los mandos armados del Alto Aulaqi, el Bajo Aulaqi y Lahej se habían unido ya antes a la SAL, mientras nutridos grupos de voluntarios de las regiones de Dathina, Wahidi y el Radfan oriental se habían adherido a ella en mayo de 1965. A esto podía agregarse el mando armado de los sultanatos de Fadhlí y Audhali. Se podía afirmar

que todos los principales mandos políticos y armados que luchaban en el Protectorado Occidental habían proclamado su adhesión a la SAL.

208. El tema principal del programa de la conferencia de Asmara, a la que había asistido la mayoría de las organizaciones invitadas, había sido la causa de la Arabia Meridional con referencia a las medidas que habían de adoptarse para que alcance la independencia. La conferencia había debatido también el período de transición y había resuelto reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas. La conferencia de Asmara señalaba el comienzo de una etapa nueva y constructiva en la lucha del pueblo de la Arabia Meridional.

209. En marzo de 1965, los representantes del Gobierno de la Federación de la Arabia Meridional habían consultado a los dirigentes del partido de la SAL y a los del FLOSY, en la zona limítrofe entre el Sultanato de Lahej y la República del Yemen; el propósito del Gobierno de la Federación era conseguir el asentimiento de la SAL y del FLOSY al principio de la celebración de reuniones oficiosas en Beirut. Los representantes del partido de la SAL y del FLOSY habían accedido a la propuesta, pero el FLOSY había retirado su acuerdo poco antes de la fecha fijada para la conferencia.

210. El partido de la SAL estaba a favor de que se celebrasen esas conversaciones por varias razones:

a) El partido de la SAL había seguido invariablemente una política positiva y atacaba toda actitud negativa.

b) El partido de la SAL consideraba que la lucha no era un fin en sí, sino más bien un medio de lograr los objetivos por los que se la había emprendido.

c) Aunque la llamada Federación de la Arabia Meridional se componía de personas cuya categoría (asignada por ellas mismas) no reconocía la SAL, representaba sin embargo a elementos tribales de los que no se podía prescindir totalmente en la búsqueda de una solución al problema de la Arabia Meridional.

d) La tarea de la SAL, órgano que acaudillaba la lucha del pueblo y que buscaba todos los medios posibles para convencer a los descarriados por sí mismos o por influencia ajena, debía inducirlos a adoptar una actitud positiva para que, aunque no lograra ganar a todos para su bando, convenciera siquiera a algunos de la validez de sus puntos de vista.

e) El partido de la SAL, aunque consentía en celebrar conversaciones con la llamada Federación de la Arabia Meridional, había declarado varias veces que su consentimiento no entrañaba reconocimiento, ya que en esa fase las conversaciones no eran de índole oficial, y también porque era el Reino Unido, y no la Federación, quien representaba la fuerza que verdaderamente se oponía al movimiento nacionalista de la región.

211. Las reuniones habían proseguido durante varios días con resultados sumamente halagüeños, habiéndose llegado a un acuerdo entre el partido de la SAL y dos representantes del FLOSY sobre la necesidad de insistir en que se aplicaran plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, ambos partidos habían coincidido en el principio de celebrar más reuniones después de consultar con las organizaciones por ellos representadas. La SAL pudo luego inducir al Gobierno de la Federación de la Arabia Meridional a declarar su conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas el 5 de noviembre de 1965, ha-

biéndose emitido una declaración a tal efecto el 12 de mayo de 1966.

212. En las segundas conversaciones de Beirut, la SAL había acogido con gran satisfacción el acuerdo del Gobierno Federal de reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas. El único sector de nacionales de la Arabia Meridional que se les oponía era el de los miembros del Gobierno de la Federación de la Arabia Meridional. Con la subsiguiente aquiescencia de este último se había llegado a la unanimidad, quedando abierto el camino a una solución satisfactoria. Naturalmente, la SAL no concedía importancia alguna a intenciones o motivos, sino a derechos legales y a opiniones públicamente expresadas y que, por ello, tenían obligatoriedad.

213. Se habían celebrado más reuniones y consultas, y los representantes de la Federación de la Arabia Meridional habían prestado su consentimiento formal a una serie de puntos:

a) La decisión adoptada por el Gobierno de la Federación respondía al deseo unánime de todos los sectores de la población de la Arabia Meridional.

b) Todos los partidos harían lo posible para imponer al Reino Unido su obligación de reconocer y aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas.

c) Lo que se había dicho de que la evacuación británica de la región provocaría un vacío era completamente infundado, ya que tal vacío lo llenaría el propio pueblo de la Arabia Meridional.

d) El asunto de la firma de un pacto defensivo con el Reino Unido estaba fuera de la competencia del Gobierno de la Federación, y debería decidirlo el Gobierno nacional nombrado por la asamblea constituyente elegida. El Ministro de Información de la Federación había emitido una declaración a tal efecto durante las conversaciones de Beirut. En calidad de representante del movimiento nacionalista en la Arabia Meridional, la SAL había declarado que se oponía a la idea de firmar un pacto de esta índole con el Reino Unido.

214. Las dos primeras conversaciones de Beirut habían asegurado ventajas importantes al movimiento nacionalista. Aquéllas, además de la conferencia de Asmara y la subsiguiente de Taiz, habían constituido un momento decisivo para la causa de la Arabia Meridional y el logro de sus aspiraciones nacionalistas.

215. El partido de la SAL acogía cordialmente la decisión adoptada por el Secretario General de las Naciones Unidas de nombrar a un representante personal que le asesorase en asuntos referentes a la Arabia Meridional, y aprobaba plenamente el nombramiento del Sr. Adeel. Este era otro paso a favor de la causa de la Arabia Meridional y allanaba el camino a la presencia de las Naciones Unidas antes de las próximas elecciones y durante éstas. Al mismo tiempo, demostraba la intención de brindar una garantía esencial de que se aplicarían oportunamente las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, la elección del Sr. Adeel había sido un acierto, por tratarse de un nacional de un país árabe hermano; Sudán comprendía bien la causa de la Arabia meridional y no estaba complicado en ninguna de las disensiones allí reinante. Además, había semejanzas entre la lucha del Sudán por su independencia y la actual situación de la Arabia Meridional.

216. El partido de la SAL representaba al movimiento nacionalista en la región y tenía 17 años de existencia. Era el primer órgano que había hecho un llama-

miento a favor de la independencia y la unificación de la Arabia Meridional sobre una base popular y democrática. Había organizado la lucha del pueblo para alcanzar esos objetivos y el colonialismo le había dirigido el gruero de sus ataques desde 1956, en forma de deportaciones y de opresión.

217. El segundo partido nacionalista — el United Nationalist Front — había sido fundado en 1955, y disuelto en 1957. El tercer partido había sido el Aden People's Socialist Party, fundado en 1962 y disuelto en 1965. El cuarto partido, el National Liberation Front, había sido fundado en 1964 y disuelto en 1966. El Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY) había sido fundado hacía tres meses por el grupo que representaba el Sr. Mackawee.

218. El partido de la SAL había atravesado épocas muy difíciles en su larga vida, pero invariablemente había resurgido firme y poderoso. A la sazón representaba la fuerza más eficaz del Territorio. Era infundado el aserto del Sr. Mackawee de que el FLOSY era el único órgano que representaba la causa de la Arabia Meridional. Evidentemente el órgano que representase a la Arabia Meridional había de ser elegido por el pueblo mediante elecciones y, en verdad, era imprudente hacer una declaración tan prematura. Otro orador había dicho que el Consejo de la Liga Árabe y el Comité de la Arabia Meridional de la Liga Árabe habían reconocido al nuevo FLOSY como único representante del pueblo de la Arabia Meridional. Esa afirmación había sido reiterada por el Sr. Mackawee. Sin embargo, nada de cierto había en la aseveración de que las conferencias árabes en la cumbre, el Consejo de la Liga Árabe o el Comité de la Arabia Meridional de la Liga Árabe habían reconocido al nuevo FLOSY como único representante del pueblo de la Arabia Meridional. En cuanto a la noticia de que el FLOSY había sido bien acogido por el Comité de la Liga Árabe, había que tener presente que la Liga Árabe, naturalmente, acogía gustosa a todo nuevo participante en la lucha nacionalista. Una cosa era este elogio, y otra muy distinta el reconocimiento de un determinado grupo como único representante del pueblo.

219. Como la Arabia Meridional atravesaba el período decisivo previo a la independencia, incumbía al Reino Unido prestar verdadero apoyo a la causa de la Arabia Meridional, para evitar el peligro de guerra civil, mediante aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Cualquier intento de prescindir de ellas tropezaría con la más decidida resistencia por parte del partido de la SAL.

220. En contestación a las preguntas que le hicieron los miembros, el Sr. Al-Gifri dijo que el verdadero conflicto estaba entre el pueblo de la Arabia Meridional y el Gobierno del Reino Unido, que era quien debiera convocar la conferencia. Las resoluciones de las Naciones Unidas se dirigían al Reino Unido, no al Gobierno de la Federación. La South Arabian League creía en la unidad y así lo había expuesto en un memorando dirigido al Comité Especial en mayo de 1962. Al colonialismo había que oponerle un frente único, dejando para más adelante la solución de cualesquiera diferencias. El FLOSY era de creación reciente y no había consultado a la SAL. Esta última se había opuesto al nombre de Front for the Liberation of Occupied South Yemen y sostenía que era necesario establecer una República de la Arabia Meridional. No rechazaba una futura unión con el Yemen, pero el objetivo más importante era la independencia; la unificación vendría luego.

En cuanto a elegir entre los nombres de "Arabia Meridional" y "Yemen Meridional" el FLOSY había rechazado la designación de "Sur ocupado" hecha por la SAL, aunque ese nombre sería aceptable como solución temporal de transacción. Una condición del FLOSY para establecer un frente común era la disolución de los partidos políticos. Pero esos partidos no se habían creado por azar, y su abolición entrañaría unificar ideologías. Por ello, la SAL no podía acceder a que se disolvieran los partidos. Lo que se necesitaba era un frente unificado que conservase a los partidos y el peticionario creía que se podía llegar pronto a un acuerdo.

221. El peticionario dijo que había estudiado las propuestas presentadas por los dos expertos y consideraba que, aunque estaban hábilmente redactadas, muchas de ellas no correspondían a los deseos de la población de Arabia Meridional. Reiteró que la constitución debía ser obra exclusiva de los representantes elegidos por el pueblo.

222. Gran Bretaña debía declarar que aceptaba la resolución aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1965 y aplicar esa resolución. En segundo término, debía constituirse, para el período de transición consiguiente, un gobierno provisional que se encargaría de los asuntos administrativos y redactar a ese fin una constitución provisional. En tercer lugar, las Naciones Unidas debían tener una participación efectiva; el nombramiento del Sr. Adeel como Representante Especial del Secretario General para la cuestión de Adén, era un primer paso en ese sentido; pero la Liga deseaba que las Naciones Unidas enviasen observadores al Territorio para fiscalizar las elecciones. Por último, en el gobierno provisional debían estar representadas la policía y las fuerzas armadas. La Liga se oponía a cualquier base militar o acuerdo defensivo y así se había hecho saber al representante de la Federación en Beirut. La Liga no había tenido nada que ver con las conversaciones de Londres y estimaba que el Gobierno de la Federación no debería haber participado en ellas.

223. El Sr. Al-Gifri dijo que en Asmara no se había establecido ningún grupo dirigente; se habían adoptado medidas para coordinar la dirección de las fuerzas nacionalistas en el sur y se había formado un grupo de organizaciones que no constituía por sí solas una organización.

224. La designación de un supervisor de las Naciones Unidas garantizaría una presencia más efectiva de las Naciones Unidas. Otra propuesta, acerca de la cual deberían ponerse de acuerdo las partes interesadas, consistiría en un período de transición con un gobierno neutral o de coalición, cuyas funciones definiría una constitución provisional. La presencia de las Naciones Unidas garantizaría la libertad de expresión y la aplicación de procedimientos electorales correctos. La constitución definitiva de Arabia Meridional debía ser un instrumento progresista y adecuado a una república; las elecciones debían ser directas y generales, y debían definirse claramente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como en todo país democrático y progresista. Como no era el momento de analizar detalles, el peticionario indicó que bastaría con decir que, en líneas generales, la constitución debía fundarse en la voluntad del pueblo. El Reino Unido sostenía que no podía haber elecciones directas en el sur, zona de organización tribal, a causa de que la población era analfabeta. Pero esto no era exacto. Los nacionalistas se oponían a las elecciones basadas en las tradiciones tribales, e insistían

en que se realizaran aplicando el sistema del sufragio universal. Los nacionalistas no permitirían jamás que los planes del Reino Unido tuvieran éxito.

225. La Liga había enviado gran cantidad de estudiantes a proseguir sus estudios en las universidades de distintos países árabes, que se habían encargado de su formación. La Liga había otorgado cerca de 500 becas a fin de enviar estudiantes a las academias militares de El Cairo y del Irak, en tanto que la Potencia administradora, en 130 años, no había hecho casi nada para ayudar a los estudiantes y apenas había permitido que unos 50 de ellos obtuvieran diplomas. Esperaba que no se derrumbara la actividad económica del país. Todo país que lograba la independencia debía enfrentar problemas económicos. Arabia Meridional no escaparía a la regla común. Para la Liga lo esencial era prever soluciones, y así lo estaba haciendo. En Adén existía un Comité compuesto por universitarios graduados y especialistas en economía que ya trabajaba en la preparación de las medidas necesarias a ese respecto. En lo que toca al puerto de Adén, el peticionario señaló que debía seguir siendo libre para beneficio de la propia economía del país. Señaló, al pasar, que el Territorio no percibía ingreso alguno de la base militar británica de Adén.

226. La Liga de Arabia Meridional distribuía entre la población folletos relativos a los problemas económicos en los que se destacaba el hecho de que el Reino Unido nada hacía para modificar la situación actual. Parecía probable que el sur del país pudiese bastarse a sí mismo. Pero era preciso también que el conjunto del Territorio y el Protectorado pudieran beneficiarse de la ayuda de expertos y técnicos de las Naciones Unidas, que ya habían prometido su ayuda para desarrollar las pesquerías locales. Esto era motivo de gran satisfacción para la Liga. Por otra parte, la Liga preveía el desarrollo de la actividad del puerto y de la industria del algodón de fibra larga. Así, pues, el país debería encontrarse en condiciones de hacer frente a sus problemas económicos inmediatos cuando obtuviera su independencia.

227. El Sr. Aswadi declaró que el Aden Trade Union Congress (ATUC) tenía 30.000 miembros, en cuyo nombre deseaba expresar su agradecimiento por los esfuerzos del Comité Especial para poner fin al imperialismo y facilitar la independencia al pueblo de Arabia Meridional. Rogó al Comité que prosiguiera sus esfuerzos y tratara de que las resoluciones de las Naciones Unidas se aplicasen en la letra y en el espíritu. Las clases trabajadoras de Arabia Meridional eran objeto de opresión. El Reino Unido intentaba privarles de los medios de expresar sus sentimientos y no les reconocía el derecho a la huelga. Además, el Reino Unido trataba no sólo de sembrar la disensión entre los trabajadores sino también de crear una nueva Palestina.

228. En contestación a varias preguntas, el peticionario replicó que el ATUC comprendía ocho sindicatos que representaban a los servicios de comunicaciones, incluido el personal de las líneas de navegación y aéreas, la industria ligera, la construcción naval, los servicios públicos de agua, gas y electricidad, los funcionarios de la administración central y local, los trabajadores de las bases británicas, los maestros, los funcionarios y empleados de banca y los trabajadores de la industria del petróleo. Desde su creación, el ATUC había dirigido la lucha de liberación en Adén porque no había otros grupos suficientemente poderosos para hacerlo. El

ATUC había desplegado gran actividad en esa región para oponerse al colonialismo en todas sus formas. Había desbaratado maquinaciones, organizado manifestaciones y reuniones públicas y planteado numerosos problemas ante los organismos interesados. Lejos de limitar su acción a Adén, había extendido su esfuerzo a todo el Territorio. Bajo la dirección del ATUC, la clase obrera había luchado encarnizadamente. Desde la fusión del National Liberation Front con otros movimientos, el ATUC formaba parte del Front.

229. La Potencia Administradora había intentado, sin lograrlo, crear sindicatos ficticios. Estos sindicatos fantasmas no conseguían probar su existencia. El ATUC era la única organización sindical responsable y representativa. Su influencia se extendía no sólo a la clase obrera, sino también a las demás clases de la sociedad. Pese a las maniobras de la Potencia Administradora y al terror que imponía, esta influencia iba en aumento. El movimiento sindical más poderoso se encontraba en Adén.

230. Tan pronto como lo permitieran las circunstancias, el ATUC tenía la intención de crear cooperativas. Para ello, había solicitado el dictamen de varios expertos, en su mayoría suecos. Esperaba ser admitido a disfrutar de la asistencia técnica prestada por las Naciones Unidas. Adén había recibido ya la visita de especialistas en la materia. El ATUC deseaba igualmente establecer industrias químicas. Ciertos países árabes y socialistas le habían prometido su apoyo para ayudarle a llevar a cabo este proyecto. En otra esfera de actividades, el ATUC proyectaba clasificar las tierras para determinar las que eran cultivables y podían ser explotadas mediante un sistema de cooperativas. Podía por tanto observarse que, aunque el ATUC había elaborado ya gran número de proyectos destinados a servir a los intereses de la población, esperaba no obstante a que el país se liberara de la dominación extranjera para ponerlas en práctica.

231. Los objetivos del ATUC y del FLOSY eran idénticos; su organización siempre había consultado a sus asociados del FLOSY al expresar opiniones de carácter político. La posición del ATUC había sido siempre la misma que la del FLOSY.

232. El Sr. Al-Aulaqi declaró que representa a 10.000 árabes meridionales de Kuwait, quienes esperaban con interés las recomendaciones del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Su organización apoyaba a la South Arabian League, por considerar que defendía su causa de manera inteligente y acertada. La League se inspiraba en tres principios: liberación de Arabia Meridional del Reino Unido, unidad y gobierno por el pueblo.

233. El Sr. Ogeil, hablando en nombre de la Salvation Organization in the South of Yemen and Aden Protectorate, agradeció al Comité Especial sus esfuerzos en nombre de los pueblos todavía sometidos al yugo colonial. Recordó que cuando el Reino Unido se había dado cuenta de que el pueblo del Yemen meridional ocupado estaba dispuesto a luchar por sus derechos, había insinuado que aplicaría las resoluciones de las Naciones Unidas, pero de hecho no lo había hecho.

234. Instó al Comité Especial a asegurar la evacuación total de la región por los imperialistas y el desmantelamiento de todas las bases militares, a eliminar los regímenes marionetas y las estructuras coloniales impuestas al pueblo contra su voluntad, a liberar a los pri-

sioneros políticos, a derogar la legislación sobre estado de urgencia y a expresar su condenación de las conferencias entre el Gobierno de la Federación y el Reino Unido.

235. En una época había sido miembro de la South Arabian League, pero se había separado de ella cuando esta organización había empezado a apoyar a los gobiernos títeres. Desde entonces había prestado pleno apoyo al FLOSY.

236. El Sr. Hussein Omar Ben-Sahl, hablando en nombre de la South Arabia Youth Organization dijo que deseaba simplemente señalar que la prolongada lucha de años anteriores podía transformarse en violencia en el futuro. Pese a su declaración de que la independencia sería concedida en 1968, la Potencia Administradora había seguido utilizando métodos represivos en Arabia Meridional. La Potencia Administradora había hecho caso omiso de parte de las resoluciones de las Naciones Unidas, que debían haber servido no sólo para preparar la independencia, sino también para resolver muchos de los problemas planteados en la región. Por lo tanto, los estudiantes de Arabia Meridional protestaban contra el Gobierno de la Federación por considerarlo un pelele manejado por el Reino Unido. No representaba al pueblo, ni tampoco era parte real en el conflicto, sino más bien un instrumento. Los estudiantes de Arabia Meridional consideraban que el verdadero representante de la región era la South Arabia League, que apoyaba su lucha por promover la independencia y el desarrollo pacífico de toda la Arabia Meridional.

Declaraciones generales

237. El representante de la República Árabe Unida felicitó al Comité Especial por la seriedad y eficacia con que estaba desarrollando sus deliberaciones. Le habían impresionado mucho las agudas preguntas e inteligentes respuestas que había oído. Su delegación había escuchado muy atentamente a los peticionarios, quienes habían puesto todos de relieve su deseo de que se pusiera fin al dominio del Reino Unido en la región y de que se aplicaran las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General. Los peticionarios se daban cuenta de que el Reino Unido trataba de perpetuar su dominio mediante los elementos que apoyaba a condición de que sirvieran a los intereses británicos, y deseaban poner fin a esas maniobras. Los peticionarios contaban con el pleno apoyo de su delegación y, sin duda alguna, con el del Comité y las Naciones Unidas.

238. Para el Gobierno de la República Árabe Unida era evidente desde hacía tiempo que la Potencia Administradora no sólo vacilaba en cooperar, sino que trabajaba activamente para dejar sin efecto las resoluciones adoptadas sobre este asunto y perpetuar su dominio sobre la región, por los motivos que tan claramente había expuesto el observador de la Liga de los Estados Árabes.

239. El citado representante deseaba especialmente señalar a la atención del Comité Especial una noticia aparecida en los periódicos del día, según la cual el Gobierno del Reino Unido había anunciado el día anterior en la Cámara de los Comunes la existencia de un programa quinquenal de ayuda militar al llamado Gobierno de la Federación de Arabia Meridional. Esa declaración era el resultado de las conversaciones concluidas el día anterior con el llamado Gobierno de la

Federación. Según la prensa, los británicos pagarían en especie al Gobierno federal el equivalente de 50 millones de dólares norteamericanos durante un período de cinco años. Este anuncio, hecho en el momento en que el Comité Especial estudiaba la cuestión del Sur ocupado, constituía no sólo un reto al Comité sino que también ponía muy a las claras los planes del Reino Unido en la región. Por supuesto, era preciso que el Comité Especial contara con información directa y no sólo con noticias de la prensa.

240. La delegación de la República Árabe Unida estimaba que como Potencia Administradora, el Gobierno del Reino Unido debía anunciar sin demora que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión del Sur ocupado, y que estaba dispuesto a cooperar con los órganos de las Naciones Unidas para aplicarlas. Para ello no había que aplaudir la aceptación de tales resoluciones por el llamado Gobierno de la Federación, o alentar a ese Gobierno a que celebrara una conferencia en agosto, a la cual asistiría un representante del Secretario General de las Naciones Unidas. Las resoluciones de las Naciones Unidas no reconocen al Gobierno de la Federación: requerían que se estableciera un gobierno a base de elecciones libres y generales. Ello quería decir que el sistema actual impuesto por los británicos en la zona debía disolverse, a fin de que el pueblo pudiera establecer una sólida base para su independencia y desarrollo. La Potencia Administradora debía desistir de su intento de imponer por la fuerza acuerdos restrictivos en la región, con el llamado acuerdo de defensa.

241. La cuestión de la presencia efectiva de las Naciones Unidas había sido planteada durante las reuniones del Comité Especial. La delegación de la RAU opinaba que esa presencia efectiva suponía la participación de las Naciones Unidas en todas las medidas necesarias para el logro de la independencia y el traspaso de poderes a los verdaderos representantes del pueblo. Correspondía al Comité determinar la forma de esa presencia, al objeto de supervisar las medidas que asegurasen la libertad del pueblo, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el levantamiento del estado de emergencia, la preparación de las listas de votantes y la supervisión de las elecciones para un gobierno temporal. El papel de las Naciones Unidas debía extenderse también en el sentido de vigilar la evolución hasta que se hubiera establecido un gobierno plenamente representativo del pueblo y se le hubieran traspasado todos los poderes. Esto era lo menos que debía hacer el Reino Unido para demostrar su buena voluntad en el asunto. Si las resoluciones de las Naciones Unidas no eran lo suficientemente claras, el Comité Especial podía sin duda alguna aclarar su sentido aprobando otras nuevas.

242. Dado que el establecimiento de la presencia efectiva de las Naciones Unidas requería que se entablaran contactos y discusiones con la Potencia Administradora, quizá conviniese que un subcomité realizase esos contactos, teniendo en cuenta los puntos de vista de los nacionalistas en su calidad de representantes del pueblo de la región. Para que se llegara a un acuerdo, el Reino Unido debía anunciar que aceptaba incondicionalmente las resoluciones de las Naciones Unidas y que estaba dispuesto a cooperar en su aplicación. Si se lograra ese acuerdo, se podrían redactar propuestas concretas para una presencia efectiva de las Naciones Unidas; pero para que esto tuviera eficacia, debía hacérselo

antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General.

243. El representante del Irak dijo que a menudo se había citado al Comité Especial como uno de los mejores ejemplos del éxito en los esfuerzos internacionales hechos a favor de la causa de la libertad, y su visita a Africa había puesto perfectamente en claro lo acertado de esa consideración. En particular, sus logros tal vez se recordasen en relación con la cuestión de Adén. Cuando se planteó por primera vez este asunto en las Naciones Unidas, hacía tres años, se sabía muy poco de las condiciones existentes en el Territorio, de las aspiraciones de su pueblo y de las esperanzas que tenía puestas en las Naciones Unidas para que lo librasen del dominio colonial. El Comité había estado a la altura de las circunstancias, pues en un plazo muy breve había conseguido demostrar la eficacia de la actuación de las Naciones Unidas en pro de la causa de la libertad. Se había designado un Subcomité para que reuniese información suficiente acerca del Territorio y poder adoptar así las decisiones necesarias. Aunque no se le había permitido visitar el Territorio, el Subcomité había recorrido ampliamente los países vecinos y escuchado a centenares de peticionarios. Los resultados de sus deliberaciones habían sido comunicados a la Asamblea General en sus informes y recomendaciones, sobre cuya base la Asamblea había aprobado la resolución 1949 (XVIII), que era la piedra angular de la acción de las Naciones Unidas en este problema. No se había limitado a enunciar simplemente los principios aplicables al Territorio, sino que había establecido un orden de prioridades y había tratado las cuestiones y detalles específicos relativos a la independencia del Territorio.

244. Esa resolución había sido reafirmada y aclarada en virtud de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, del 5 de noviembre de 1965; las dos resoluciones eran únicas en los anales de las Naciones Unidas, puesto que habían dado la consigna a los que luchaban por la libertad. Las mismas habían sido aceptadas unánimemente por todos los sectores de la población del Territorio, hecho que honraba al Comité y era prueba de la visión con que éste había considerado el problema.

245. Sin embargo, en todas estas cuestiones revestía capital importancia la actitud de la Potencia Administradora, y por desgracia la que había asumido el Gobierno del Reino Unido distaba de constituir una ayuda para el Comité Especial. Ese Gobierno había impedido que el Subcomité de Adén visitase el Territorio para examinar la situación sobre el terreno, y se había negado absolutamente a declarar en forma inequívoca que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas y que estaba dispuesto a aplicarlas lealmente como Miembro de las Naciones Unidas. No había levantado el estado de emergencia declarado desde 1963, no había derogado las leyes y prácticas represivas que habían sido condenadas repetidamente por las Naciones Unidas, y había proseguido sus operaciones militares, con grandes pérdidas de vidas y bienes. Por lo tanto, el primer deber del Comité era exhortar una vez más a la Potencia Administradora a que declarara de manera inequívoca, lisa y llanamente, que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas y que estaba dispuesta a cooperar con lealtad y por entero en su aplicación. Era inútil decir que el régimen ficticio que había creado había aceptado esas resoluciones. Por lo que respecta a las Naciones

Unidas, la administración del Territorio era responsabilidad única y exclusiva del Gobierno del Reino Unido.

246. El Gobierno del Reino Unido había declarado que iba a conceder la independencia en determinada fecha, pero el problema era saber de qué tipo de independencia se trataba y en qué condiciones iba a concederse. ¿Iba a dejar la Potencia colonial un gobierno formado por sus amigos, que estuviera a su entera disposición y pusiera en práctica su política, o concedería la independencia dejando al país en manos de los verdaderos representantes del pueblo, cuyos intereses eran los de ese pueblo y no los de la Potencia colonial?

247. Ya que el pueblo del Territorio había declarado que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas, el Comité Especial tenía el solemne deber de velar porque se las aplicara plena y adecuadamente, y porque la independencia que se concediese como resultado de las mismas fuera genuina y permitiera al pueblo del Territorio disfrutar sin trabas de su libertad. No bastaba simplemente con reafirmar el derecho del pueblo a la independencia y a la libertad: era preciso aplicar medidas prácticas para que dicha independencia se realizara en las circunstancias más favorables posibles. La mejor forma de lograrlo era aplicar las condiciones de la resolución original, en la cual se estipulaba que la celebración de elecciones generales bajo la supervisión de las Naciones Unidas sería precedida por el levantamiento inmediato del estado de emergencia, la derogación de todas las leyes y reglamentos represivos, la cesación de las operaciones militares contra el pueblo del Territorio y la abolición de las actuales instituciones constitucionales, con miras a establecer un gobierno provisional para el período transitorio.

248. Refiriéndose al acuerdo de defensa de que había hablado el representante de la República Árabe Unida, y firmado por el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la Federación de la Arabia Meridional, el representante del Irak manifestó que la cuestión que entrañaba era muy seria y requería la atención del Comité Especial, pues existía el peligro de que la liquidación de la base militar de Adén quedara en la nada si el nuevo Estado independiente se vinculase al Reino Unido en cuestiones de defensa y se perpetuara así la influencia británica en el Territorio. El Comité debía seguir el asunto de cerca, dado que podía tener consecuencias muy serias para el futuro del Territorio.

249. El representante de Túnez declaró que, por sus antecedentes, su intensidad y sus repercusiones, el problema de Adén y de los Protectorados de la Arabia Meridional constituía simplemente un problema colonial. Al decidirse a prestar todo su apoyo moral y material a los pueblos que trataban de independizarse, Túnez, que también había sufrido el colonialismo, no abrigaba segundas intenciones de ambición ni de expansionismo: trataba simplemente de cumplir lo que consideraba deber imperioso de todo Estado digno de este nombre.

250. Por otra parte, la delegación tunecina había sostenido siempre que interesaba a las propias Potencias administradoras facilitar la descolonización. En efecto, todos sabían que nadie podía mantener durante mucho tiempo un gobierno, por fuerte que fuera, mientras este gobierno no contara con el apoyo de las masas.

251. En la mayoría de los espíritus el nombre de Adén evocaba la presencia de una base militar británi-

ca. Ahora bien, quien dice base militar sobreentiende una situación de fuerza, con todo lo que implicaba represión, miseria y falta total de progreso. Por ello, el representante de Túnez daba las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores del Irak por su importante alocución, y aseguraba a la población de Adén el apoyo fraternal de Túnez.

252. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que otra vez se veía obligado el Comité Especial a deliberar sobre la cuestión de la grave y peligrosa situación que existía en Adén, o mejor dicho en la Arabia Meridional. El mero hecho de que el Comité estuviera deliberando de nuevo sobre el problema era elocuente por sí mismo, puesto que revelaba la beligerancia y persistencia con que el colonialismo británico trataba de aferrarse a las tierras del pueblo árabe. De aquí que, para ver los hechos pertinentes de la situación de la Arabia Meridional en toda su perspectiva, fuera necesario proceder a un profundo análisis de la situación en su conjunto.

253. La cuestión del colonialismo era característica. El problema concreto que el Comité Especial tenía a la vista, o sea el del colonialismo británico en la Arabia Meridional, no era menos característico que en otras partes del mundo, y por lo tanto había que enfocarlo desde todos los ángulos.

254. La cuestión del colonialismo era característica por las muchas maniobras que se había tratado de realizar. Pero en la Arabia Meridional consistieron en tratar de dividir a las fuerzas anticoloniales. Así, las fuerzas coloniales británicas estaban tratando de explotar a las fuerzas feudales para evitar que los señores feudales atendieran a los legítimos deseos de las masas y se pusieran de parte del pueblo, que estaba luchando por la legítima independencia de su Territorio.

255. Ahora bien, para atraer a estas fuerzas feudales las autoridades coloniales habían tratado de crearles enemigos ficticios. Al proceder así la autoridad colonial trataba de aislar al pueblo de la Arabia Meridional del resto del nacionalismo árabe. Esto ya se había intentado en Africa, y se seguía intentando. El citado representante aseguró al pueblo de Adén que sus esperanzas y su seguridad futura sin duda alguna dependían de su cooperación con el resto del mundo árabe. Porque aun cuando su delegación admitiera que el colonialismo no era sino una etapa pasajera, no veía cómo la Arabia Meridional podría seguir siendo un enclave impenetrable en un mar de nacionalismo árabe. En la historia no había ejemplos de este tipo; por otra parte, sin embargo, había varios ejemplos que mostraban hasta qué punto era necesario que el pueblo de la Arabia Meridional se uniera al resto del mundo árabe. Por ejemplo, en Africa esa necesidad había quedado demostrada con la creación de la Organización de la Unidad Africana (OUA). Así, todo intento de aislar a un país africano de la OUA sería casi lo mismo que un intento de aislar a la Arabia Meridional del resto del mundo árabe. En los dos casos, estas tentativas estaban condenadas al fracaso. El deseo de unidad regional prevalecía en muchas partes del mundo. Se encontraba en Africa encarnada en la OUA, en la América Latina, y en Europa. Por lo tanto, sería una locura que el pueblo de la Arabia Meridional se dejase aislar del resto del mundo panárabe.

256. De las pruebas disponibles se desprendía claramente que la situación en la Arabia Meridional se ha-

bía ido deteriorando rápidamente desde que se había aprobado la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General. Esta era la realidad, pese a las declaraciones del Gobierno del Reino Unido de que la Arabia Meridional obtendría la independencia en 1968 a más tardar. Por consiguiente, se imponía analizar por qué, a pesar de sus halagüeñas declaraciones, el Gobierno del Reino Unido había seguido con su política colonial represiva.

257. En *The Washington Post* del 1º de enero de 1964 se decía que la política británica en Arabia se basaba en dos factores interdependientes: el petróleo y la llamada defensa. Este era el quid de la cuestión. Como había sostenido siempre la delegación de Tanzania, el colonialismo y la subyugación no eran fruto de un capricho aventurero. La colonización de las tierras era consecuencia de objetivos económicos premeditados. El Oriente Medio era una de las regiones del mundo más ricas en petróleo. Tal vez en su codicia por este importante producto las fuerzas británicas habían cometido actos de agresión contra la Arabia Meridional, y la habían colonizado para utilizarla como posición ventajosa.

258. En lo que se refiere al aspecto de la llamada defensa, el Reino Unido consideraba que Adén era un punto estratégico. Gracias a la heroica resistencia del pueblo de la República Árabe Unida, los británicos habían sido expulsados de Suez y se habían retirado a la colonia de Adén. Asimismo, gracias a la animosa lucha del pueblo del Irak, los británicos se habían visto obligados a abandonar esa zona, y se habían retirado de nuevo a su colonia de Adén. En ambos casos los pueblos de esas tierras, amantes de la libertad y la paz, y fieles a sus justos y legítimos deseos de paz y de mantener su libertad, se habían negado a permitir que los británicos utilizaran sus tierras soberanas como bases de operaciones, y a que pusieran así en peligro su propia libertad y paz.

259. El representante de Tanzania citó este ejemplo para que se comprendiera mejor la legítima lucha que libraba el heroico pueblo de la Arabia Meridional para derrotar a las fuerzas del colonialismo británico en su patria. La lucha en que se hallaba empeñado este intrépido pueblo era necesaria, y respondía a los esfuerzos gigantescos que estaban realizando los pueblos del mundo amantes de la libertad para alcanzar la independencia y la paz con dignidad. Las pruebas existentes demostraban que el Reino Unido, mientras por un lado hacía declaraciones halagüeñas sobre el futuro del Territorio, tomaba al mismo tiempo nuevas y mayores medidas represivas contra los nacionalistas de la Arabia Meridional.

260. Al aprobar la resolución 1949 (XVIII), y después la resolución 2023 (XX), la Asamblea General, considerando acertadamente que las bases militares establecidas en dicho Territorio constituían un obstáculo importante para la liberación de la Arabia Meridional y eran perjudiciales para la paz en esa región, había pedido al Gobierno del Reino Unido que las suprimiera inmediatamente. La delegación de Tanzania había apoyado la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General, en la cual entre otras cosas pedía la supresión de la base militar de Adén. El apoyo a dicha resolución se había basado en el principio elemental de que, en el mundo de hoy, la instalación de bases militares en tierras de otros pueblos no sólo estaba pasada de moda, sino que creaba un peligro

para esos mismos pueblos; sobre todo, creaba un peligro para los Estados vecinos. Por esta razón, tanto en la OUA como en las Naciones Unidas la delegación de Tanzania se había opuesto a la creación de una base militar en el Océano Índico adyacente a la costa de África Oriental.

261. Este era el principio que guiaba a su delegación en la cuestión de las bases militares. Dicha delegación había recibido con agrado la declaración del Gobierno del Reino Unido de que se suprimiría la base militar de Adén, y lo había considerado como una notable prueba de prudencia por parte del Gobierno del Reino Unido, aun cuando, por supuesto, prefería que esta medida se adoptara mucho antes de 1968. En cambio, se había enterado con consternación de que la supresión de la base de Adén significaría el traslado de la misma a otra parte del mundo árabe, o sea en la región de la Arabia Meridional. No podía comprender el razonamiento según el cual la supresión de la base de Adén debía entrañar su instalación en la misma región. Para decirlo en términos sencillos, era como si la matrícula de un coche se quitara de la parte delantera para instalarla en la de atrás. La delegación de Tanzania exhortaba al Gobierno del Reino Unido a que escuchara la voz de la opinión pública. Creía sinceramente que los mismos motivos que lo habían inducido a suprimir la base de Adén deberían servir para que se abstuviera de establecerla en otra parte de la misma región. Además, consideraba que cuanto antes se dieran cuenta los británicos de este hecho, tanto mejores serían sus relaciones con el mundo panárabe. La Carta de las Naciones Unidas se basaba totalmente en la condición de que los pueblos del mundo vivieran en paz y amistad unos con otros, animados de respeto y comprensión mutua.

262. Pero había algunos que alegaban la importancia económica de la base para la región. El representante de Tanzania les contestaba que el fin era lo que justificaba los medios y no los medios los que justificaban el fin. Después de todo, no se podía negar que según habían declarado los peticionarios dicha base había sido la causa de muchas operaciones militares que habían tenido como consecuencia la muerte de muchos ciudadanos inocentes. Además, si el pueblo de la Arabia Meridional había podido vivir antes de instalarse la base, sin duda alguna podría vivir con mejores perspectivas cuando se la eliminase.

263. Era verdad que el Gobierno del Reino Unido había declarado que la Arabia Meridional lograría la independencia en 1968. La delegación de Tanzania era absoluta partidaria de la independencia de la Arabia Meridional, y se oponía enérgicamente a la subyugación criminal de un pueblo por cualquier Potencia colonial. Tanzania conocía muy bien los crueles sufrimientos que esto entrañaba. Por su propia experiencia y por la del intrépido pueblo de la Arabia Meridional, todavía abrigaba recelos pese a tales declaraciones. Era preciso comprender que el que estaba en mejores condiciones de pedir la independencia de la Arabia Meridional era el verdadero pueblo de ese país, que ya había manifestado de manera elocuente que su postura era "independencia sin demora".

264. Analizando los actos del Reino Unido desde que hizo su declaración sobre el porvenir de la Arabia Meridional, el representante de Tanzania dijo que el documento preparado por la Secretaría (véanse párra-

fos 4 a 58 *supra*) demostraba que el 25 de septiembre de 1965 el Gobierno del Reino Unido sólo deseaba suspender la Constitución de Adén y había investido de facultades prácticamente omnipotentes al Gobernador colonial. Esto significaba que el Gobierno del Reino Unido, a la vez que declaraba estar preparándose para abandonar la Arabia Meridional, buscaba todos los medios posibles de crear las condiciones necesarias para controlar al Territorio en el futuro.

265. Este hecho ya lo habían reconocido claramente la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, como había quedado demostrado al aprobarse la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General. El párrafo 4 de esta resolución era una manifestación clara que no necesitaba explicaciones, y planteaba una importantísima cuestión: que iba a ser de Adén o de la Arabia Meridional después de la independencia. Todos repetían que el futuro de la Arabia Meridional dependía inevitablemente de la unidad del pueblo libremente expresada, en el sentido de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Así pues, toda tentativa de dividir al pueblo de Adén valiéndose de los señores feudales y tradicionales sólo conduciría a disturbios en el futuro. Por ende, la independencia bajo un régimen que no reconociera plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas no podía menos que conducir a la inestabilidad futura en la región.

266. Esto llevaba al representante de Tanzania a referirse a la tentativa del Gobierno del Reino Unido de engañar a la opinión mundial. El Gobierno del Reino Unido había dado publicidad a una llamada declaración (véase anexo IV) según la cual el régimen local, que no era representativo, tenía la intención de adherirse a las diversas resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la Arabia Meridional. Este era el colmo de la hipocresía y del cinismo por parte del Gobierno del Reino Unido. En lo que se refiere a las Naciones Unidas y a la República Unida de Tanzania, las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la Arabia Meridional tenían que ser acatadas y aplicadas por el Gobierno del Reino Unido en su carácter de Potencia Administradora, y no por un régimen instalado por esa Potencia merced a la supresión de los representantes auténticos de las masas que luchaban por su independencia.

267. La delegación de Tanzania había quedado muy sorprendida al enterarse de que las autoridades de Adén se habían convertido en el hazmerreír de la opinión pública mundial. La resolución no indicaba de ningún modo ni en ningún párrafo, directa o indirectamente, que se hubiera reconocido a las autoridades de Adén, y aun cuando esas autoridades pudieran actuar en un periodo de transición, la verdad era que solamente el Reino Unido era responsable de la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. El representante de Tanzania no veía los motivos que abonaban este errado consejo de la Potencia Administradora a las autoridades de Adén en un asunto tan sencillo y obvio. Por ende, resultaba igualmente lamentable que las autoridades de Adén se hubieran dejado vencer en una cuestión tan obvia.

268. La delegación de Tanzania acogía con agrado una declaración que demostrara que el Gobierno del Reino Unido estaba poniendo en práctica fiel y plenamente las disposiciones de las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, en

las que se mencionaba la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Estaba firmemente convencida de que cumpliendo fielmente dichas resoluciones era como se crearían condiciones favorables para lograr una independencia auténtica y sin trabas en la Arabia Meridional.

269. Había dos medios principales para erradicar el colonialismo del mundo: en primer lugar, el camino de la persuasión y la opinión pública mundial, que era el camino que las Naciones Unidas habían querido seguir, y que había dado origen a la creación de la Cuarta Comisión y del Comité Especial. En virtud de este procedimiento se encarecía constantemente a las Potencias coloniales que renunciaran a sus colonias, y que prepararan un programa de independencia que se ajustase a las condiciones establecidas en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea. Esto era lo que necesitaba el pueblo de la Arabia Meridional. El segundo medio era el de la dura lucha, una lucha cuya historia estaba escrita con la sangre de los que habían combatido por la libertad. Estos eran los dos caminos que tenía ante sí la causa de la descolonización. No cabía duda de que muchos pueblos amantes de la paz preferirían la acción del Comité Especial, que se realizaba con arreglo al primer procedimiento. Pero el Reino Unido no parecía oír la voz de la razón y obligaba al pueblo de la Arabia Meridional a recurrir a la lucha armada. El sentimiento de frustración acumulada que experimentaban los pueblos colonizados no les dejaba otra alternativa que luchar hasta el fin. Esto había sucedido en Argelia, Kenia y en muchas otras partes del mundo. Estaba sucediendo a la sazón en Adén debido a la falta de cooperación del Gobierno del Reino Unido.

270. El representante de Tanzania hizo una solemne advertencia a las Potencias coloniales, para que escucharan la voz de la razón y de este modo evitaran el derramamiento de sangre. Pero creía que no había precio alguno que el pueblo de Adén no estuviera dispuesto a pagar para liberar a su país del colonialismo. Estaba seguro de expresar no sólo los sentimientos de la República Unida de Tanzania, sino los de todos los pueblos amantes de la paz, al decir que habrían de ser libres; las Potencias coloniales no podían cambiar el curso de la historia. La historia estaba de parte del pueblo de Adén y la victoria sería suya.

271. Dijo que deseaba que los luchadores por la libertad que habían comparecido ante el Comité supieran hasta qué punto el Comité Especial apoyaba su lucha como una causa moral y legítima que merecía apoyo moral y material. El colonialismo estaba muriendo y se agitaba violentamente en las convulsiones de su agonía. Había que hacer frente al colonialismo aunando las fuerzas de las masas de la Arabia Meridional. El proverbio "la unión hace la fuerza" era un proverbio universal, muy corriente en los pueblos árabes. Se trataba de un mismo pueblo, con un objetivo común y legítimo: la liberación completa de la Arabia Meridional. El Comité Especial haría lo que estaba en su mano, y no cabía duda de que los pueblos árabes harían otro tanto. Como la lucha en que estaban empeñados era justa, se vería coronada por la victoria, con la cual se lograría eliminar el sistema de explotación del hombre por el hombre, para que las naciones progresaran en la unidad, la libertad y la paz.

272. El representante de Tanzania reiteró a los peticionarios que, sean cuales fueren las resoluciones

que adoptase el Comité Especial, éste se guiaría por los deseos del pueblo de la Arabia Meridional expresados por conducto de sus dirigentes que habían comparecido como peticionarios. Deseó al pueblo de la Arabia Meridional un éxito completo en su lucha por la independencia.

273. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la URSS había mantenido firmemente su posición de apoyo a la lucha de los pueblos coloniales por su liberación. Partiendo de esa posición de principio, la Unión Soviética apoyaba las justas demandas de libertad e independencia de los pueblos de Adén y de la Arabia Meridional y también su derecho a decidir por sí mismos la cuestión de su forma de gobierno futura. La delegación soviética había apoyado las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, en las que se indicaron los medios concretos que podrían llevar a la independencia a los pueblos de la Arabia Meridional sometidos actualmente a la opresión colonial.

274. Era evidente que los intereses de la Potencia Administradora y los de la población eran diametralmente opuestos: mientras el Reino Unido se ocupaba de los intereses de los monopolios financieros internacionales y de sus propios intereses militares estratégicos, la población de Adén sufría una opresión cruel. Dicha población luchaba por su independencia bajo la dirección del Frente de Liberación, que había sido reconocido por gran número de organizaciones nacionales e internacionales. Mientras este Frente de Liberación servía a los intereses de Adén y de toda la península árabe, el llamado Gobierno federal estaba liquidando los intereses del pueblo y tratando de celebrar un acuerdo con los colonialistas del Reino Unido. El desdichado espectáculo que tenía lugar en Adén estaba en realidad dirigido desde Londres. El denominado Gobierno federal, que afirmaba actualmente su intención de aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas, había guardado silencio durante dos años y medio. No era a ese Gobierno, que no representaba a nadie, sino a la Potencia Administradora a quien correspondía aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas.

275. Según la información contenida en las declaraciones del Secretario General Interino de la Liga de los Estados Árabes y en la declaración hecha por el Presidente del Frente de Liberación el 11 de junio, el Gobierno federal se había entregado a nuevos desafueros y había emprendido negociaciones secretas con el Gobierno británico a fin de protegerse, con la ayuda del Reino Unido, de la ira del pueblo, y, a cambio de eso, ayudar al Reino Unido a mantener su influencia en Adén y en los Protectorados.

276. En su resolución 2023 (XX), la Asamblea General había condenado las tentativas de la Potencia Administradora de imponer el régimen no representativo de dicho Gobierno federal. Los métodos utilizados por los colonialistas británicos en Adén podían compararse con los que aplicaban en Rhodesia del Sur. El Gobierno británico trataba de imponer a Adén y a la Arabia Meridional un gobierno integrado por títeres, como lo había hecho en Rhodesia del Sur.

277. La conferencia constitucional que se celebraría en Adén a principios de agosto no era sino una maniobra más con la cual el Reino Unido esperaba eludir sus responsabilidades y entorpecer la aplicación de las

resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Cómo podría esa conferencia defender los intereses de la población de Adén, si todos los que iban a participar en ella eran lacayos y agentes serviles a sueldo del Reino Unido? El Comité Especial debía oponerse enérgicamente a la convocación de dicha conferencia y declarar que era contraria al párrafo 4 de la resolución de la Asamblea General relativa a Adén. Debía pedir que la Potencia Administradora levantara el estado de emergencia en el Territorio, evacuara las bases militares de Adén y de las demás partes del Territorio de la Arabia Meridional, pusiera en libertad a los presos y diera a la población la posibilidad de expresarse libremente con respecto a su forma de gobierno futura.

278. El representante del Reino Unido había declarado el 16 de mayo de 1966, en Nueva York, que se levantaría el estado de emergencia cuando desaparecieran lo que calificó de movimientos "subversivos" en el interior del Territorio. ¿Cómo podía calificar de movimientos "subversivos" a las justas actividades de los patriotas que luchaban para defender los intereses de toda la población? Sus actos eran legítimos, mientras que los del Reino Unido violaban la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. La política británica en esa región se explicaba únicamente por el deseo de salvaguardar los intereses económicos del Reino Unido, particularmente los de los monopolios petroleros, y de conservar Adén, que era una base estratégica de la mayor importancia. Los hechos ponían de manifiesto que la afirmación del Reino Unido de que evacuaría la base de Adén después de conceder lo que denominaba "independencia" al Territorio en 1968 no era sincera, y que el Reino Unido estaba seguro de poder firmar los acuerdos necesarios con el Gobierno títere para poder conservar su influencia en la región.

279. El Comité Especial debía pedir a la Asamblea General que incluyera en su programa y estudiara seriamente la cuestión de las bases militares, que los colonialistas utilizaban prácticamente en todo el mundo para continuar con su política imperialista y oprimir a los pueblos que se oponían a sus maniobras imperialistas.

280. El representante de Malí dijo que la cuestión de Adén y de los Protectorados era uno de los problemas coloniales más graves que preocupaban al Comité Especial desde hacía varios años. Dio las gracias al Gobierno de la República Árabe Unida por haber permitido al Comité ponerse en contacto con los verdaderos hijos de Adén y de los Protectorados, y subrayó que era efectivamente en Adén donde el Comité Especial debería haberse reunido, si la Potencia Administradora hubiera dado mayores pruebas de cooperación y no hubiese entorpecido la aplicación de las resoluciones del Comité Especial y de la Asamblea General.

281. El Gobierno de Malí consideraba a Adén y sus Protectorados como una colonia, y seguía convencido de que la responsabilidad del Gobierno británico con respecto a las poblaciones de dicho Territorio era lo que se definía en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas.

282. Los peticionarios que se habían presentado ante el Comité Especial, fueran los del Frente de Liberación de Adén o los de la Liga de la Arabia Meridional, habían puesto en evidencia esta responsabi-

lidad primordial del Reino Unido con ejemplos precisos. En sus declaraciones habían puesto de relieve los aspectos negativos del colonialismo clásico, con sus consecuencias de tensión permanente en la región de la Arabia Meridional. La presencia extranjera en Adén constituía un peligro para los Estados vecinos, y particularmente para el Estado soberano del Yemén. ¿Cómo justificaba el Reino Unido el mantenimiento de su base militar en Adén, sino como medio de agresión contra los Estados árabes?

283. Cada vez que el Comité Especial estudiaba la situación en un Territorio bajo dominación británica, tropezaba con las mismas dificultades: mantenimiento, contra la voluntad de los pueblos del Territorio en cuestión, de bases militares de agresión, encarnizada explotación de las riquezas naturales del país y, con frecuencia como en el caso de Rhodesia del Sur y Adén, establecimiento de un régimen de policía basado en títeres que no representaban más intereses que los británicos.

284. En lugar de cooperar con las Naciones Unidas y poner en práctica las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, que reclamaban principalmente el desmantelamiento de la base militar de Adén, la Potencia Administradora instalaba en su territorio a señores feudales, jeques o sultanes analfabetos que no sabían siquiera escribir su nombre.

285. El representante de Malí pensaba como la mayoría de los miembros del Comité Especial que la resolución 1514 (XV), en que figuraba la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, debía aplicarse inmediatamente a Adén y sus Protectorados. El pueblo de Adén merecía el apoyo del Comité Especial, que debía reafirmar sus derechos inalienables a la libre determinación y a la independencia.

286. Apoyaba las solicitudes de los peticionarios sobre las medidas que la Potencia Administradora debería tomar para restablecer la normalidad en el Territorio. Estas medidas eran las siguientes: levantar el estado de emergencia, derogar todas las leyes de excepción y todas las que coartan las libertades públicas, poner fin a toda acción represiva contra el pueblo del Territorio, suspender los bombardeos, poner en libertad a todos los presos políticos y permitir el retorno de los desterrados. Estas medidas constituían el mínimo indispensable para restablecer la normalidad en el Territorio. Además, en calidad de Potencia Administradora, el Reino Unido debía organizar elecciones libres bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Correspondería luego a los representantes de la población, elegidos por sufragio universal, escoger y elaborar la constitución. El representante de Malí se oponía a la convocación de la conferencia constitucional prevista para el mes de agosto, por estimar que no correspondía a los expertos británicos elaborar una constitución para el pueblo de Adén y que una conferencia semejante no serviría a los intereses de la población.

287. Los peticionarios habían insistido en la necesidad de suprimir los pequeños Estados de los jeques, y habían pedido que se creara un verdadero Estado unitario moderno y democrático. El citado representante apoyaba esta idea, y pensaba que se debería pedir al Reino Unido que modificara las estructuras existentes en Adén y concediera inmediatamente la independencia al Territorio. Además, debería abolir los pe-

queños Estados y disolver al Gobierno federal integrado por sultanes, puesto que ese gobierno no representaba nada.

288. El representante de Bulgaria hizo una recapitulación de la situación. En primer lugar, el Reino Unido no había respondido de modo positivo a la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, y trataba de imponer un gobierno de títeres en Adén y en los Protectorados de Adén a fin de mantener su influencia en la región. En segundo lugar, las fuerzas nacionalistas y patrióticas que luchaban por la independencia de su país habían cerrado filas y libraban una resuelta lucha contra la opresión colonialista. En tercer lugar, los peticionarios del Frente de Liberación habían subrayado la importancia que atribuían a una presencia efectiva de las Naciones Unidas durante el período de las elecciones, para que éstas se desarrollasen en un ambiente de libertad y diesen como resultado el traspaso de poderes a los representantes del pueblo elegidos por sufragio universal. En cuarto lugar, los peticionarios habían puesto de relieve el peligro que representaba para la paz y la seguridad internacionales la existencia de bases militares en Adén y en los territorios de la Arabia Meridional, peligro que el Comité Especial debía señalar a la atención del Consejo de Seguridad.

289. Dijo que había quedado impresionado por la declaración llena de prudencia del representante de la República Árabe Unida, quien había analizado en forma notable la peligrosa situación que existía en la región de Adén y había formulado al Comité Especial sugerencias realistas y llenas de buen sentido. Como el representante de la República Árabe Unida, él pensaba que la actitud del Reino Unido frente a las resoluciones de las Naciones Unidas representaba un desafío a la Organización, y el Comité Especial debería pedir al Reino Unido que aplicara inmediatamente dichas resoluciones y cooperara en la restitución de los legítimos derechos de la población de Adén. Además, el Comité Especial debería estudiar con atención las propuestas detalladas y concretas del representante de la República Árabe Unida, que podían servir de base para la organización de una presencia eficaz de las Naciones Unidas antes, durante y después de las elecciones y hasta que se traspasaran los poderes a un gobierno representativo elegido por la población de Adén.

290. El representante de Sierra Leona recordó que en agosto de 1965 el Reino Unido había prometido conceder la independencia a Adén para 1968 y dismantelar la base militar. Sin embargo, era importante saber qué clase de independencia se consideraba, porque los peticionarios habían señalado que no se estaba haciendo nada para aplicar las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General en las que se pedía la abolición de las disposiciones relativas al estado de excepción y de las restricciones y represión consiguientes, así como la libertad de todos los detenidos políticos y el regreso de los desterrados. Los peticionarios se habían referido también a la necesidad de la presencia de las Naciones Unidas, la que debía ponerse de relieve en cualquier resolución sobre la cuestión de Adén que preparara el Comité Especial. Era menester enviar observadores para asegurar que ningún régimen títere usurpase el derecho de la población a escoger con libertad su derrotero político. El Comité tenía que recordar a la Potencia Administradora su obligación para con los habitantes y para con las Naciones Unidas. El Reino Unido,

si no tenía maniobras que ocultar y nada que temer, debía declarar que aceptaba las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas de conformidad con los deseos de la población. Había llegado el momento de actuar, pues la Potencia Administradora estaba firmando acuerdos que le darían un dominio casi completo de la vida política y económica de la región después de la "independencia".

291. El representante de Dinamarca dijo que el problema principal era el de asegurar que el pueblo ejerciera el derecho a la libre determinación, que en casi todos los casos era un complemento natural de la independencia. Sin embargo, la situación de Adén y de la Arabia Meridional no era una situación típica, pues todos los interesados, incluida la Potencia Administradora, había convenido en que la Arabia Meridional sería independiente. Sin embargo, los peticionarios y muchos representantes en el Comité Especial habían expresado temores de que pudiera tratarse de una independencia sin libre determinación y bajo un régimen que no gozara de la confianza de la mayoría de la población. Su delegación sostenía que la Arabia Meridional debía ser independiente y, deseando vivamente ver una independencia legítima, convenía en todos los puntos esenciales con los representantes de los movimientos nacionalistas, y, el representante estaba seguro de ello, con todos los miembros del Comité Especial.

292. El representante de Polonia dijo que, aunque la cuestión de Adén había sido considerada en varias oportunidades por la Asamblea General y el Comité Especial, la situación imperante en el Territorio se había deteriorado considerablemente y continuaba siendo causa de tirantez en toda la región. Ello se debía a la política de la Potencia Administradora, que en forma persistente había hecho caso omiso de las aspiraciones de verdadera independencia de la población de Adén y de la península de Arabia Meridional, y no había colaborado con las Naciones Unidas y el Comité Especial en el fiel cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General referentes a Adén. Las Naciones Unidas deseaban aplicar las resoluciones pertinentes y poner al pueblo de Adén en condiciones de adoptar una decisión sobre el porvenir de su país.

293. Los miembros del Comité Especial sabían que las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General no sólo enunciaban el principio de la libre determinación y la independencia de conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, sino que también bosquejaban el procedimiento que se había de seguir. Además, las declaraciones de los peticionarios que habían comparecido ante el Comité en Mogadiscio, Adís Abeba y El Cairo mostraban claramente que el Reino Unido se negaba a cumplir las decisiones de las Naciones Unidas. En efecto, el estado de excepción continuaba en vigor, las libertades públicas habían sido prácticamente abolidas y el número de detenidos políticos había aumentado, lo mismo que la acción represiva, las expediciones militares, el bombardeo de aldeas y la matanza de habitantes inocentes. Además, al cometer todos esos actos brutales contra los dueños legítimos del país, el Reino Unido estaba tratando de presentar al movimiento de liberación nacional del Territorio como un grupo de terroristas. No había nada nuevo en eso, pues la historia del colonialismo había demostrado que las medidas represivas adoptadas contra los movimientos nacionalistas o contra los gobiernos

democráticamente elegidos eran siempre contraproducentes y que las Potencias coloniales trataban de presentar como terroristas a todos los legítimos luchadores por la libertad. Muchos de los actuales dirigentes de los países recientemente independizados habían sido en alguna oportunidad considerados terroristas por el Reino Unido y hasta habían cumplido penas de prisión. El pueblo polaco no tenía dudas acerca de la victoria final de la lucha de liberación que se llevaba a cabo en Adén y la península de Arabia Meridional, y deseaba expresar su solidaridad con los objetivos del Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY) y felicitar a sus miembros por haber logrado unir a todas las fuerzas patrióticas del Territorio interesadas genuinamente en la libertad y en la independencia de su patria.

294. El Sr. Mackawee había descrito la amenaza a los políticos que se habían negado a colaborar con la Potencia Administradora y a obedecer instrucciones que iban en contra de los intereses de la población. El petionario había explicado también cómo el Reino Unido, al no permitir la colaboración de elecciones generales, tenía el propósito de confiar en sus servidores tradicionales — los jeques y sultanes — para asegurar su hegemonía en el país después de la aparente concesión de la independencia.

295. La política de la Potencia administradora no podía engañar a nadie. El Reino Unido estaba tratando de mantener su dominio colonial frente a las resoluciones de las Naciones Unidas, pues consideraba que la región era de importancia vital para sus egoístas intereses económicos, políticos y estratégicos. Anhelaba particularmente proteger la gran refinería de petróleo de Adén y mantener el control sobre los recursos existentes y potenciales del Territorio, y sobre todo llevar a cabo la búsqueda de petróleo en el Protectorado oriental. Era con el objeto de proteger esos intereses que la Potencia Administradora empleaba la fuerza para suprimir la resistencia nacional y que recurría a otras maniobras tales como la imposición de la denominada Federación de la Arabia Meridional, la cual era, por supuesto, un régimen títere.

296. Al declarar que el Gobierno federal aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Adén, la Potencia Administradora deseaba señalar la existencia de un gobierno representativo de todo el país. Sin embargo, la delegación de Polonia compartía plenamente la opinión ya expresada en el Comité Especial en el sentido de que, por lo que hace a las Naciones Unidas, el Gobierno de la denominada Federación de la Arabia Meridional no era un gobierno constitucional propiamente dicho. En efecto, la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General rechazaba ese Gobierno al deplorar, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, que la Potencia Administradora hubiera intentado establecer un régimen no representativo en el Territorio, con miras a concederle la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General, y hacía un llamamiento a todos los Estados para que no reconocieran independencia alguna que no se basara en los deseos del pueblo del Territorio libremente expresados en elecciones celebradas mediante el sufragio universal de los adultos. En realidad, las resoluciones de la Asamblea General y la actividad del Comité Especial estaban dirigidas precisamente contra la existencia de la Federación. El Comité Especial tenía la obligación de denunciar la convocatoria de una con-

ferencia por el Gobierno federal con el propósito aparente de estudiar las resoluciones de las Naciones Unidas y de ponerse de acuerdo sobre los mejores medios de darles aplicación. Correspondía al Reino Unido aceptar dichas resoluciones y aplicarlas sin nuevas demoras. Correspondía también a las Naciones Unidas y al Comité Especial asegurar que después de 1968 se transfiriera al pueblo la soberanía y se preservara la unidad del Territorio. Además, la independencia debía ser precedida por elecciones generales realizadas mediante el sufragio universal de los adultos y en condiciones de libertad, que pudieran asegurarse en forma óptima mediante la presencia de las Naciones Unidas antes, durante y después de las elecciones.

297. El representante del Irán dio la bienvenida al Representante Especial del Secretario General para la cuestión de Adén, Sr. Adeel, cuya designación constituía el primer paso esencial hacia el establecimiento de una presencia efectiva de las Naciones Unidas en el Territorio de Adén. Su delegación deseaba expresar agradecimiento al Secretario General por adoptar tan importante medida en cumplimiento de la resolución 2023 (XX) aprobada por la Asamblea General el 5 de noviembre de 1965.

298. Al parecer, el imperialismo había logrado una vez más abrir una brecha entre los diversos movimientos nacionalistas de la Arabia Meridional. Era de lamentar que muchos elementos que, hasta hacía pocos meses, habían concurrido ante la Cuarta Comisión, durante el vigésimo periodo de sesiones de la Asamblea General, constituyendo un frente unido, se hubieran dividido posteriormente en diversos grupos fraccionarios. La lucha contra el colonialismo exigía toda la fuerza que una nación pudiera reunir, y la división, a pesar de la unidad de propósitos y a pesar de la proximidad de la independencia, constituía un lamentable reflejo de la situación de Adén que empeoraba desde la revocación de la Constitución en septiembre de 1965. El Irán había copatrocinado la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, que deploraba los intentos de la Potencia Administradora de establecer un régimen no representativo en el Territorio con miras a concederle la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General. Sin embargo, el Reino Unido había dado un paso más hacia la consolidación de la posición de un régimen que no gozaba del apoyo y la confianza de la población.

299. La delegación del Irán sostenía que la plena realización del derecho inalienable de la población de la Arabia Meridional a la libertad y a la independencia sólo podía lograrse mediante el establecimiento de un gobierno verdaderamente representativo y creía firmemente que debía dejarse al pueblo del Territorio que decidiera en libertad quién había de representarlo. Por lo tanto, la presencia de las Naciones Unidas para supervisar las elecciones era de máxima importancia. Para que la población pudiera expresarse libremente, era indispensable que mucho antes de celebrarse las elecciones se establecieran en el Territorio condiciones favorables a una transición pacífica. El Reino Unido debía adoptar medidas inmediatamente para poner fin al estado de excepción, derogar todas las leyes que coartaban las libertades públicas, hacer cesar toda acción represiva contra el pueblo del Territorio, poner en libertad a todos los detenidos políticos y permitir el regreso de las personas desterradas por razones políticas. Sólo en esas condiciones podrían los diversos partidos políticos

bucar el apoyo público. Si la población no había expresado libremente sus deseos, ningún grupo, partido o frente podía pretender que era el único representante del pueblo. Aunque era obligación de la Potencia Administradora crear las condiciones necesarias para que todos los partidos políticos gozaran de libertad de expresión, era también deber de los dirigentes y partidos responsables de Adén informar al público acerca de sus opiniones, planes y objetivos.

300. El representante del Irán deseaba asociar su delegación al llamamiento en favor de la unidad que había hecho el representante de la República Unida de Tanzania a los peticionarios y a los combatientes por la libertad, y reiterar a la población de la Arabia Meridional el pleno apoyo y la simpatía del Gobierno del Irán a su causa justa. Para terminar, les deseaba el mayor éxito en el establecimiento de un gobierno verdaderamente representativo, capaz de asegurar y garantizar la independencia y la libertad del pueblo de la Arabia Meridional.

301. El representante de Venezuela declaró que cuatro años antes, en su primer viaje a El Cairo, el Subcomité de Adén había oído las declaraciones de un impresionante número de peticionarios. Se podía pensar entonces que la Potencia Administradora se rendiría ante la evidencia y aplicaría las resoluciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, pasados cuatro años, la situación de Adén no había mejorado; se podría incluso decir que había empeorado. Tal situación se caracterizaba por lo que se podría denominar un diálogo de sordos; por un lado, las Naciones Unidas formulaban recomendaciones relativas a la aplicación de la resolución 1514 (XV); por el otro, la Potencia Administradora no cesaba de adoptar medidas que contradecían formalmente las recomendaciones de las Naciones Unidas. En oposición al deseo unánime de la población, y a pesar de las recomendaciones de la Asamblea General, la Potencia Administradora había creado un supuesto Gobierno federal del que se encontraba excluida la mayoría de los territorios que domina. Dicha Potencia se había negado a organizar elecciones libres y atendía sólo a sus intereses. A los llamamientos que se le habían hecho para que restableciera la calma, respondía intensificando sus operaciones militares y continuaba deteniendo a ciudadanos de Adén. En consecuencia, el Comité Especial se veía forzado a llegar a la conclusión de que la Potencia Administradora hacía caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General.

302. En una carta de fecha 25 de mayo de 1966, dirigida al Secretario General, el supuesto Gobierno federal afirmaba su intención de aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la Arabia Meridional. A juicio del representante de Venezuela, el único objetivo que perseguía esa carta consistía en burlarse de las Naciones Unidas y de la opinión pública mundial, haciendo creer en la legitimidad de dicho Gobierno. El aceptarla equivaldría a reconocer implícitamente a tal Gobierno y, por consiguiente, a liberar a la Gran Bretaña de sus responsabilidades. Ahora bien, la Asamblea General siempre se había dirigido expresamente al Reino Unido, y no al citado Gobierno federal.

303. El pueblo de Adén y de los Protectorados tenía derecho a la libre determinación, como todos los demás pueblos que sufrían o habían sufrido la dominación colonial. Pero no se trataba aquí de concederle una falsa independencia traspasando el poder a un gobierno creado de la nada por la Potencia Administradora. Este go-

bierno no representaba en manera alguna los intereses de la Arabia Meridional. Para determinar cuáles eran los legítimos representantes de dicho Territorio sería menester que el Comité Especial realizara muchas consultas con los representantes de todas las tendencias de la opinión pública.

304. El representante de Venezuela estaba convencido de que la Asamblea General y el Comité Especial ya no podían cambiar de actitud. Las Naciones Unidas debían exigir al Reino Unido que cumpliera sus obligaciones y protegiera a la población de los territorios que administraba, de conformidad con la resolución 1514 (XV).

305. El representante de la India dijo que su delegación confiaba en que, tras tantas resoluciones de las Naciones Unidas, el Reino Unido prestase atención a la opinión internacional, y agregó que vio fracasada su esperanza de que, después de las elecciones generales en el Reino Unido, la situación mejorase. Los británicos manifestaban ser campeones de la democracia, pero la ausencia del representante del Reino Unido mostraba el verdadero valor de tal afirmación.

306. Naturalmente, el representante de la India se congratulaba de que Adén hubiera de recibir su independencia, pero esa alegría era restringida porque temía las maniobras de la Potencia Administradora y porque comprendía la estratagema consistente en instalar regímenes títeres. En la cuestión de Palestina no se les había hecho justicia a los árabes, y la situación de Adén representaba un nuevo retroceso. Si la Potencia Administradora no tuviese nada que ocultar, seguramente no se opondría a que las Naciones Unidas efectuasen una investigación sobre el terreno.

307. El representante de Siria dijo que era evidente que la Potencia Administradora no sólo hacía caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Adén, sino que, en muchos casos, actuaba en oposición a ellas. La Potencia Administradora no había fijado la fecha inmediata para la independencia que habían solicitado las Naciones Unidas, sino la fecha que convenía con su siniestro propósito de ahondar la división en el país y consolidar su dominio de los intereses vitales por conducto de un denominado Gobierno federal servil y totalmente no representativo, que de gobierno sólo tenía el nombre.

308. La Potencia Administradora no ponía en libertad a los presos políticos, sino que aumentaba su número, y las modestas cifras citadas por el representante del Reino Unido en Nueva York habían sido desmentidas por el testimonio concreto de los peticionarios. No levantaba el estado de excepción, sino que lo hacía más riguroso. La detención, en horas de la noche, de nacionalistas, ex ministros, dignatarios y otros patriotas inocentes, la forma despiadada en que se allanaban sus hogares y se trataba a sus familias, eran ya cosa corriente.

309. A la Potencia Administradora le había resultado conveniente justificar su represión invocando lo que calificaba de terrorismo y violencia. La conquista del Territorio, la sujeción de su pueblo, el saqueo de sus recursos, la siniestra política de mantener a la población en la pobreza y la ignorancia, todo esto no constituía violencia ante los ojos de la Potencia Administradora, sino que era una misión civilizadora. Pero cuando los patriotas luchaban para lograr la libertad, ponían en tela de juicio el dominio extranjero que se les había impuesto, o denunciaban a los raros títeres tribales que cola-

boraban con los invasores, se transformaban en bandidos y terroristas.

310. El representante de Siria no estimaba que la conducta del Reino Unido representara un ejemplo aislado ni se encontrara motivada por circunstancias especiales. Se trataba, más bien, de una política antigua y deliberada que no se aplicaba exclusivamente a Adén, sino a todo el mundo árabe. Hacía mucho tiempo — y esto no había cambiado a lo largo de los años — el Reino Unido había infligido desastre tras desastre a los árabes, disponiendo libremente de porciones sagradas de sus territorios, impidiendo su renacimiento, obstaculizando su unidad, y fortaleciendo, como en la Arabia Meridional, ciertas disposiciones tribales anticuadas a fin de mantenerlos en una ignorancia y una sujeción totales. El Reino Unido condicionaba la permanencia de sus intereses imperialistas y el control garantizado de los recursos árabes al mantenimiento de los árabes en una condición de inferioridad: ignorantes, confusos y divididos.

311. En lo que respecta a la promesa de independencia en 1968, el vocero oficial de la Potencia Administradora la condicionaba al retorno a la normalidad. Las expresiones tales como "situación de normalidad" y "seguridad pública", tan a menudo repetidas por los representantes de la Potencia Administradora, sólo significaban que los árabes de la Arabia Meridional debían olvidarse de la intrusión extranjera en su región, aceptar las órdenes del Gobernador británico, declarar su lealtad al gobierno local elegido por él, no por ellos, aceptar los monopolios extranjeros de sus recursos y de la prospección de recursos, colaborar en el mantenimiento de bases militares en su suelo, sirviendo a fines contrarios a su vocación de paz y hermandad, y, si se desmantelaban tales bases, aceptar la construcción de otras en su proximidad en la patria de sus hermanos y primos. Si hicieren todo esto, serían independientes en 1968. Si tales eran las condiciones de la independencia, mejor sería que los árabes de la Arabia Meridional la conquistaran mediante la lucha, en vez de aceptarla como caridad de manos sospechosas. Siria no se dejaba engañar por la promesa de independencia de Adén para 1968, a la que consideraba como colonialismo bajo otro disfraz. Siria estaba resuelta a oponerse al establecimiento de nuevas bases en tierras árabes, que violaba el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

312. El representante de Yugoslavia recordó que la cuestión de Adén había figurado en el programa de la Asamblea General y en el del Comité Especial durante varios años y que ambos órganos habían aprobado muchas resoluciones solicitando a la Potencia Administradora que aplicara la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Hacía más de un año, el Comité Especial había pedido a dicha Potencia que convocase una conferencia de representantes de todos los sectores de la opinión pública para decidir la cuestión de las medidas constitucionales necesarias para celebrar elecciones mediante el sufragio universal de los adultos. La Asamblea General, en su resolución 2023 (XX), había deplorado que la Potencia Administradora se hubiese negado a aplicar sus resoluciones anteriores y había deplorado también sus intentos de establecer un régimen no representativo en el Territorio.

313. Las pruebas brindadas por los peticionarios demostraban que la situación en el Territorio seguía siendo explosiva: el estado de excepción todavía se hallaba en vigor, la población seguía siendo objeto de repre-

sión, se aplicaban aún leyes discriminatorias y crecía el número de las personas detenidas y arrestadas.

314. Era cierto que la Potencia Administradora había declarado su intención de conceder la independencia para 1968, así como la de dismantelar sus bases militares. Sin embargo, tales declaraciones resultaban vanas si no iban a acompañadas de medidas concretas para establecer un gobierno representativo, y no había indicios de que se fueran a adoptar esas medidas. Por el contrario, la Potencia Administradora estimulaba al denominado Gobierno federal a que convocara una conferencia, y según se había informado, también iba a firmar un acuerdo de defensa con la Federación. Ello sólo podría conducir a un aumento de la tirantez en la zona.

315. A juicio de su delegación, el Gobierno del Reino Unido era el único responsable de la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Como se había señalado en el más reciente informe del Subcomité de Adén, el denominado Gobierno Federal no tenía participación en el asunto. Si el Reino Unido deseaba sinceramente resolver el problema, debía convocar una conferencia de los sectores representativos de la población para que decidiera acerca de los métodos de traspaso del poder al pueblo. Sin embargo, antes que eso pudiera llevarse a cabo, era menester crear el clima adecuado poniendo fin al estado de excepción, liberando los detenidos políticos y derogando las leyes discriminatorias.

316. El representante de Chile dijo que, como siempre, su delegación había observado con grandísimo interés el debate sobre la cuestión de Adén. Se conocía perfectamente la posición de Chile con respecto al deseo de la población de liberarse del yugo colonial y crear un gobierno que representara a la mayoría.

317. Hizo notar que, al interrogar a los peticionarios, el Comité Especial se había preocupado por encontrar nuevos medios de asegurar la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En efecto, no se había registrado en los últimos tiempos ninguna mejora de la situación de Adén y de los Protectorados; por el contrario, todo indicaba que si la Potencia Administradora no se esforzaba por aplicar dicha resolución, la situación del Territorio sin duda habría de empeorar.

318. La Potencia Administradora, al anunciar que concedería la independencia al Territorio en 1968, había complicado bastante el problema del Comité Especial, que se veía obligado a redoblar sus esfuerzos para evitar una catástrofe inminente. Todos los miembros del Comité convendrían en que era imposible conceder la independencia al Territorio en la situación en que se encontraba. No se trataba de aplazar la fecha de la independencia, pero era importante velar porque todos tuvieran la posibilidad de participar en una consulta electoral, sobre la base del sufragio universal, respecto del porvenir del Territorio. La resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General señalaba con precisión el papel que en tal sentido correspondía a la Potencia Administradora; sin embargo, ésta no se había mostrado tan dispuesta a cooperar como hubiese sido necesario para salir del atolladero.

319. El representante de Chile aseguró a los peticionarios y, por su intermedio, a toda la población de la Arabia Meridional, que su país seguía interesándose en su causa y esperaba que el plan de acción elegido por el Comité Especial diera los resultados deseados.

320. El representante de Etiopía declaró que sólo se podría proteger el verdadero interés del pueblo de Adén

si las Naciones Unidas tomaran medidas para evitar el desastre del colonialismo británico. La era del colonialismo había pasado, y el Reino Unido debía hacer los preparativos para retirarse rápidamente.

321. Etiopía tenía muchas vinculaciones con esa región, pues el Golfo de Adén había sido punto de confluencia de migrantes durante miles de años. Por tal motivo, la cuestión de Adén resultaba de especial interés para su delegación, que había escuchado con atención las declaraciones de los peticionarios. Sin embargo, los individuos, por importantes que pudieran ser, no reemplazaban a una nación, y el representante de Etiopía subrayaba que no era función del Comité Especial escoger dirigentes; ésta sería la prerrogativa del pueblo de Adén, ejercida en elecciones libres. Sólo se podría lograr la victoria mediante un esfuerzo cooperativo, y el representante de Etiopía indicó que confiaba en que se alcanzara ese triunfo sin nuevos derramamientos de sangre.

322. El representante de Australia dijo que, aunque su delegación había intentado precisar los hechos referentes a la situación de Adén, seguía confusa no solamente en lo tocante a la situación en sí misma, sino incluso en lo que se refería a la zona de que se trataba, que parecía ser distinta según la persona que hablara sobre ella. Por consiguiente, deseaba dejar en claro que hablaba de la zona de la Federación, incluso Adén, y de los Protectorados o unidades más pequeños que no se habían unido a la Federación.

323. Los elementos de la situación al parecer eran los siguientes: presencia del Reino Unido; principados y poderes de diferentes magnitudes; reclamaciones contradictorias por parte de elementos árabes del Territorio; violencia; un Estado unificado que, según se decía, buscaban todas las partes interesadas; un comprensible deseo de los árabes de lograr la cohesión con el gran mundo árabe, y un firme compromiso del Reino Unido de conceder la independencia para 1968. A estos elementos se debía agregar el anuncio formulado por los Ministros federales de su aceptación de las resoluciones del Comité Especial; una declaración reconocidamente no inequívoca del Reino Unido a ese respecto, y recientes informes de un acuerdo de defensa entre el Reino Unido y la Federación.

324. En su resolución 1514 (XV), la Asamblea General había recalcado que todos los pueblos tenían el derecho de libre determinación o independencia en conformidad con sus deseos libremente expresados. Así, pues, la tarea del Comité Especial no consistía en procurar perpetuar el gobierno de los distintos soberanos ni en tratar de darle fin; ese es asunto que competía al pueblo interesado. La delegación de Australia aceptaba las seguridades dadas por el Reino Unido acerca de la independencia para 1968, y estimaba que lo que se debía hacer entre tanto era una labor de preparación para dicha independencia. Sin embargo, habían surgido facciones con objetivos divergentes, y la delegación de Australia, a esta altura de los acontecimientos, no se encontraba en condiciones de decidir cuál de esas facciones representaba los deseos de la mayoría de la población de la región. La delegación australiana no podía rechazar la reciente declaración hecha por los Ministros de la Federación en el sentido de que deseaban dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas. También aceptaba la realidad de la Federación, cuyos ministros no eran, a su juicio, los títeres que habían sugerido algunos de los peticionarios.

325. El representante de la Costa de Marfil recordó que la cuestión de Adén figuraba en el programa del Comité Especial desde hacía varios años, y que la Asamblea General le había dedicado varias resoluciones. Lamentó que la Potencia Administradora hubiera hecho tan poco caso de las resoluciones en que se encarecía la abolición del estado de excepción, la derogación de las leyes represivas, el cese de las operaciones militares dirigidas contra la población del Territorio y el regreso de los exiliados políticos. En lugar de organizar elecciones por sufragio universal que habrían permitido el retorno al orden y a la tranquilidad, la Potencia Administradora apoyaba a un régimen repudiado por el conjunto de la población, como lo habían indicado los peticionarios.

326. La Costa de Marfil no podía apoyar a un régimen hostil al pueblo. Por eso, una vez más, la delegación de la Costa de Marfil reafirmaba el derecho de la población de Adén y los Protectorados a la libre determinación y a la independencia, y formulaba un urgente llamamiento a la Potencia Administradora para que, con la mayor rapidez posible, aplicara las resoluciones de la Asamblea General, que habían aprobado todos los sectores de la población. Asimismo, hacía un llamamiento a todos los nacionalistas de Adén para que se unieran en la lucha contra el enemigo común y aseguraran de ese modo el triunfo de la justicia y de la libertad.

327. La representante de los Estados Unidos de América expresó la simpatía de su Gobierno por las legítimas aspiraciones del pueblo de Arabia Meridional hacia el gobierno propio, y le deseó éxito en la difícil tarea de edificar su futuro.

328. La última declaración que se había hecho ante el Comité Especial no justificaba el optimismo, pues, en vez de los preparativos constructivos para la independencia, prevalecían en la zona el terrorismo y la violencia. Sin embargo, había ciertas perspectivas para una solución de las diferencias y un mayor grado de unidad. Todos los peticionarios habían señalado la necesidad imperiosa de la unidad política, sin la cual la independencia carecía de sentido. Sin embargo, esa unidad no podía ser impuesta, por ningún otro gobierno ni por las Naciones Unidas, sino que era el propio pueblo el que debía lograrla.

329. Las Naciones Unidas podían facilitar el progreso hacia ese objetivo, y era alentador saber que el Secretario General había designado un Representante Especial para la cuestión de Adén para que contribuyera a facilitar esa tarea.

330. Los debates sobre la cuestión de Adén habían dado nuevas pruebas de los serios problemas políticos y económicos que debían superarse, y los Estados Unidos acogían con satisfacción el hecho de que el pueblo estaría pronto en condiciones de resolver por sí mismo esos problemas, hecho que — justo era reconocerlo — se debía en gran parte a la Potencia Administradora. Las Naciones Unidas tenían la responsabilidad, en primer término, de ayudar al pueblo a lograr la unidad política dentro de una estructura democrática y representativa y, en segundo lugar, de buscar la forma de poner término a la violencia y al derramamiento de sangre. Los Estados Unidos no tenían ninguna idea preconcebida sobre cómo debían lograrse dichos objetivos; su preocupación principal era que la solución reflejara los intereses de toda la población de la zona.

331. Para finalizar indicó que, al aproximarse la fecha de la independencia de Arabia Meridional, el Gobierno de los Estados Unidos creía que todos debían intentar que el nuevo Estado naciera en paz y tranquilidad. El Comité Especial podía hacer una importante contribución hacia ese fin, examinando la situación con un criterio justo y objetivo y ofreciendo un asesoramiento práctico y constructivo a quienes buscaban el bienestar del pueblo y la paz en la región.

332. El representante de Italia dijo que por la experiencia que le había dado su larga vinculación con el Comité Especial, la delegación de Italia había llegado a la conclusión de que los problemas de la descolonización podían dividirse en tres categorías: primero, aquellos casos en que los métodos y objetivos de la Potencia Administradora eran diferentes de los establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea y que, por consiguiente, estaban en conflicto con la práctica del Comité Especial, como era el caso del África Sudoccidental; segundo, aquellos casos en que la Potencia Administradora estaba de acuerdo con el Comité Especial en cuanto a los objetivos a largo plazo pero discrepaba sobre los objetivos a corto plazo y sobre la mejor forma de lograrlos, como era el caso de Rhodesia del Sur; y, tercero, aquellos casos en que la Potencia Administradora y las Naciones Unidas tenían los mismos objetivos a largo y a corto plazo, pero diferían en cuanto a las medidas prácticas para aplicarlos. En opinión de la delegación de Italia, el caso de Adén correspondía a la tercera categoría.

333. Todos conocían la decisión, tomada por el Reino Unido, de conceder la independencia del Territorio hacia 1968, así como de su intención de dismantelar las bases militares, si bien la supresión de las bases no era un factor indispensable en el proceso de descolonización.

334. La situación de Adén, en lo relativo a la evolución constitucional, no parecía pues tan oscura como la habían pintado algunos representantes. Todos estaban de acuerdo en que las elecciones que se celebraran antes de la independencia habrían de ser libres y organizadas de modo tal que reflejaran las principales tendencias de la opinión, y en que sería necesaria la presencia de las Naciones Unidas como influencia estabilizadora a fin de evitar toda violencia y garantizar una auténtica independencia. Sería necesario celebrar extensas consultas y negociaciones a fin de que todos los sectores de la población pudieran llegar a un acuerdo acerca de su futura constitución. Por último, el país necesitaría también asistencia económica y técnica de las Naciones Unidas. Había muy pocas discrepancias sobre esos puntos.

335. El representante de Siria, ejerciendo su derecho a contestar, dijo que la representante de los Estados Unidos había aludido a los grandes problemas y complejidades de la cuestión de Adén y había llegado a elogiar a la Potencia Administradora, pese al hecho de que no se había llegado a solución alguna y de que no había habido elecciones generales que pusieran al país en la senda de la democracia. Una elevada defensa de la prudencia y la moderación carecía de valor si no se pasaba a la acción.

336. El representante del Irán, ejerciendo su derecho a contestar, dijo que en el curso de las actuaciones del Comité Especial sobre la cuestión de Adén se había hecho referencia a Bahrein considerándolo como una

tierra árabe. A fin de no interrumpir las actuaciones del Comité, se había abstenido con gran dificultad de invocar su derecho a contestar. Dado que el Comité Especial había llegado ahora al final de su labor, deseaba reservar los derechos de su delegación sobre la futura condición de dicho Territorio y del derecho a contestar que su delegación utilizaría oportunamente. Por el momento sólo deseaba decir que estas pretensiones sobre Bahrein, parte integrante del Irán, no estaban justificadas por el derecho internacional, por la historia o por el origen étnico de los habitantes del Territorio.

F. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

337. En la 445a. sesión, el representante del Irak presentó un proyecto de resolución (A/AC.109/L.309), que patrocinaban el Afganistán, Etiopía, India, Irak, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia.

338. Al presentar el proyecto de resolución, señaló especialmente a la atención del Comité Especial el párrafo 11 de la parte dispositiva por considerar que era el elemento esencial de la resolución.

339. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que la mejor forma en que el Comité Especial podía expresar sus sentimientos era formulándolos en una resolución como la que tenía a la vista.

340. Las actuales autoridades de Adén no representaban la opinión del pueblo, y la delegación de Tanzania apoyaba la oposición expresada en el proyecto de resolución a toda medida que la Potencia Administradora adoptara para apoyar un gobierno que no era representativo.

341. En el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se reafirmaba el derecho inalienable a la libertad e independencia. Para reforzar este párrafo su delegación también apoyaba decididamente el párrafo 8 de la parte dispositiva. Los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva ponían de manifiesto que el Comité Especial se opondría a toda acción del Gobierno del Reino Unido encaminada a eludir el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. En lo que se refería a la delegación de Tanzania, la conferencia que se proponía celebrar en Adén en agosto de 1966 sería nula y sin valor, porque las autoridades de ese Territorio no tenían competencia para aplicar las resoluciones. En cuanto al párrafo 11 de la parte dispositiva, la delegación de Tanzania expresaba su gratitud al Secretario General por haber nombrado un representante especial para la cuestión de Adén, y confiaba en que a su regreso éste transmitiera al Secretario General la opinión del Comité Especial de que las medidas previstas en el párrafo 11 de la parte dispositiva se debían adoptar con toda la rapidez requerida. El representante de Tanzania dijo que confiaba en que fuera posible presentar un informe a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, acerca de las recomendaciones del Comité Especial.

342. El representante de Bulgaria manifestó que el proyecto de resolución recibiría el apoyo de su delegación puesto que condenaba abiertamente la conferencia constitucional prevista para el mes de agosto. En especial, apoyaba el párrafo 11 que representaba un paso importante hacia la definición de las funciones que las Naciones Unidas estarían llamadas a desempeñar en dicho Territorio.

343. En la 446a. sesión, se distribuyó una adición al proyecto de resolución, en nombre de los patrocinadores de éste (A/AC.109/L.309/Add.1).

344. El representante de Dinamarca declaró que su delegación no estaba convencida de que el método recomendado en el proyecto de resolución fuera el mejor, o siquiera de que fuera apropiado. No estaba de acuerdo con la descripción de la situación que se daba en el párrafo quinto del preámbulo y en el párrafo 10 de la parte dispositiva. La situación no era tan grave, en lo que respecta a sus consecuencias para la paz de la región, como para justificar que se recurriera al Consejo de Seguridad. Los párrafos 2 y 6 de la parte dispositiva presentaban un panorama algo unilateral de la situación. El representante de Dinamarca no comprendía qué era lo que se había de ganar con semejante procedimiento. Su delegación no podía apoyar el llamamiento hecho en el párrafo 9 de la parte dispositiva, pues el mismo podría aplicarse a la ayuda para actos de violencia. La lucha por la libertad y la independencia de la Arabia Meridional podía todavía llevarse a cabo en la mesa de conferencias, más bien que en las calles o en las montañas. Por lo tanto, la delegación danesa no podía aceptar el párrafo 5 de la parte dispositiva.

345. El párrafo 12 de la parte dispositiva debía considerarse conjuntamente con el párrafo 8 de la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General y con el párrafo 13 de la resolución 2023 (XX). En la primera resolución, se pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y la Potencia Administradora, adoptara las medidas necesarias para asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas antes y durante las elecciones, pero en la segunda, se pedía al Secretario General que adoptara las medidas que creyera adecuadas para asegurar la aplicación de la resolución. Así, pues, la Asamblea General había depositado la responsabilidad principal en el Secretario General, cuya primera medida había sido designar al Sr. Omar Adeel como representante especial para la cuestión de Adén. La delegación de Dinamarca acogía con beneplácito la elección del Sr. Adeel. Además, el Secretario General en su informe (véase anexo III) había declarado que a la luz del informe que su Representante Especial presentaría sobre los actuales debates del Comité Especial, consideraría las demás medidas que hubiera de adoptar en consulta con el Comité Especial y la Potencia Administradora, todo ello de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General. La delegación de Dinamarca expresaba por lo tanto su firme opinión de que el Comité Especial no podía ni debía tratar de anticiparse a las nuevas medidas que se habían de adoptar ni de influir en las mismas, trabando con ello la acción del Secretario General. Las directivas dadas al Secretario General en el párrafo 12 de la parte dispositiva podrían también interpretarse en el sentido de que entrañaban falta de confianza en él. Ciertamente esa no podía haber sido la intención de ninguno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. En vista de todas estas consideraciones, la delegación danesa no podría apoyar el proyecto de resolución.

346. Sin embargo, se adhería plenamente al llamamiento a la unidad entre los movimientos nacionalistas de la Arabia Meridional hecho por el representante de la República Unida de Tanzania el día anterior. Ese llamamiento era mucho más responsable que las expresiones de apoyo a una facción política dadas por unas cuantas delegaciones. Jamás se beneficiaría a la pobla-

ción de la Arabia Meridional acentuando las diferencias, las cuales debían hacerse desaparecer lo más pronto posible.

347. El representante de Dinamarca dijo que si bien su delegación hubiera preferido que el Comité Especial adoptara una actitud más positiva e imaginativa que la que el proyecto representa, Dinamarca seguía creyendo firmemente que las Naciones Unidas podían desempeñar un papel eficaz en la consecución de una independencia genuina por la Arabia Meridional. Si todas las partes tuviesen buena voluntad, las Naciones Unidas podrían, mediante la cooperación entre el Secretario General, el Comité Especial y la Potencia Administradora, elaborar disposiciones que condujeran a la obtención de la independencia verdadera por la Arabia Meridional, en forma ordenada y pacífica. La delegación de Dinamarca contribuiría con el mayor empeño a la consecución de ese fin.

348. El representante de Polonia dijo que su delegación acogía con beneplácito el hecho de que en el proyecto de resolución de las diez Potencias se hubiera incluido el párrafo 11 de la parte dispositiva, y asignaba particular importancia a las medidas que la Potencia Administradora había de adoptar según lo previsto en el párrafo 7. La base militar debía dismantelarse a fin de fomentar un ambiente de libertad y terminar con ese trampolín de agresión contra el Territorio y contra otros países. El anuncio hecho por el Gobierno del Reino Unido de que dismantelaría la base de Adén estaba en contradicción con los denominados nuevos acuerdos de defensa que la Potencia Administradora estaba considerando celebrar, o ya ha celebrado, con el régimen no representativo. La delegación polaca se oponía firmemente a cualquier disposición de esa naturaleza y consideraba que sólo podía constituir un grave impedimento al libre ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, acogería con beneplácito la inclusión en el proyecto de resolución de un nuevo párrafo que se refiriera a este aspecto particular del problema. La delegación de Polonia convenía con los propósitos del proyecto de resolución y votaría en favor del mismo.

349. El representante del Irán declaró que su delegación se habría contado complacida entre los patrocinadores del proyecto de resolución que el Comité Especial tenía ante sí. En realidad, había sido uno de los patrocinadores del proyecto original distribuido el día anterior. Aunque tenía algunas reservas acerca de los párrafos 5 y 11 de la parte dispositiva, se había abstenido de adoptar una posición firme porque deseaba dar prioridad a las opiniones de los representantes árabes. Sin embargo, como estimaba que el párrafo 5 de la parte dispositiva reflejaba sólo las opiniones de un grupo de peticionarios a expensas del otro grupo principal, no podía apoyarlo.

350. El representante del Irán deseaba presentar oficialmente dos enmiendas al párrafo 11 de la parte dispositiva: insertar las palabras "y aquellas personalidades que estime conveniente" tras las palabras "... misión especial para Adén, formada por Estados miembros del Comité Especial..."; y modificar la última frase de manera que dijera "e informe al Secretario General a la mayor brevedad posible". Estas enmiendas harían que el proyecto de resolución se ajustara a las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General. Con estas salvedades, su delegación apoyaba plenamente todas las disposiciones contenidas en el proyecto de resolución.

351. El representante de la India se manifestó sorprendido de que algunas personas hubieran dicho que el proyecto de resolución no contenía nada positivo. Para empezar, en él se formulaba un llamamiento a todos los Estados para que prestaran ayuda al pueblo del Territorio en sus esfuerzos por lograr la libertad y la independencia. Una delegación se había opuesto al principio de la ayuda de todos los Estados; pero no había formulado ninguna objeción especial a la asistencia concedida a Rhodesia del Sur.

352. La conferencia mencionada en el párrafo 5 de la parte dispositiva no estaba prevista en la resolución de las Naciones Unidas. Sin embargo, las maniobras del Reino Unido no habían de tener éxito. El Comité Especial confiaba en el Secretario General; entretanto, lo único que podía hacer era aprobar la resolución. Dicho representante esperaba, pues, que los peticionarios tuvieran paciencia y no recurrieran a otros medios.

353. El representante del Afganistán dijo que el problema de Adén era de índole puramente colonial, y la Potencia Administradora era la única responsable de que se aplicaran incondicionalmente las resoluciones de las Naciones Unidas y se garantizara el progreso del Territorio hacia la libre determinación. Debía asimismo poner fin a sus operaciones militares y asegurar elecciones democráticas, y según el citado representante, las Naciones Unidas podrían brindar la mejor supervisión de dichas elecciones, tal como se señalaba en el párrafo 11 del proyecto de resolución.

354. El representante de Yugoslavia declaró que su delegación consideraba que el Comité Especial tenía el deber de sugerir medidas apropiadas para hallar una solución pacífica al difícil problema de Adén, y por tal motivo copatrocinó el proyecto de resolución.

355. El representante de Chile dijo que su delegación había examinado con mucha atención el proyecto de resolución, y en especial su párrafo 11. La presencia de las Naciones Unidas en el Territorio, que solicitaban todos los peticionarios, era el único medio — como unánimemente se reconocía — de lograr que la Potencia Administradora adoptara medidas compatibles con la participación real de la población en la consulta electoral que recomendaban las Naciones Unidas. Los demás elementos que figuraban en el proyecto de resolución no eran nuevos; todos ellos ya estaban contenidos en las anteriores resoluciones sobre esa cuestión y expresaban la inquietud del Comité Especial ante la falta de reacción de la Potencia Administradora con respecto a las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas. Por tal razón, animada del sincero deseo de que se pusiera fin a la colonización del Territorio, la delegación de Chile apoyaría el proyecto de resolución.

356. El representante de Australia dijo que su delegación estimaba que las palabras "... y que se debe a la política que la Potencia Administradora sigue en el Territorio", que figuraban en el párrafo quinto del preámbulo del proyecto de resolución, constituían por lo menos una explicación exageradamente simplificada. Aunque admitía que no eran inequívocas las declaraciones hechas por el Reino Unido sobre la cuestión de Adén a raíz de las recientes declaraciones de los Ministros federales, la delegación de Australia opinaba que resultaba prematuro, en estos momentos, el párrafo sexto del preámbulo, que decía lo siguiente: "*Lamentando* que la Potencia Administradora se haya negado a aplicar las resoluciones de la Asamblea General relativas al Territorio de Adén y Protectorados de Adén."

357. En cuanto al párrafo 2 de la parte dispositiva, el citado representante dijo que su delegación no podía aceptar la afirmación de que la Potencia Administradora había establecido un régimen no representativo con miras a conceder la independencia en violación de las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General, y reiteró que creía en la importancia capital de los deseos del pueblo expresados libremente por medio de elecciones celebradas con el sistema del sufragio universal de los adultos. Además estaba en desacuerdo respecto del párrafo 5 de la parte dispositiva, y consideraba que los párrafos 6, 7, 8 y 9 de la parte dispositiva constituían una explicación exageradamente simplificada de un asunto complicado. La delegación de Australia se interesaba profundamente por el párrafo 11 de la parte dispositiva, si bien dudaba de que estuviera redactado de manera apropiada.

358. En la 447a. sesión, el representante del Irak presentó un texto revisado del proyecto de resolución (A/AC.109/L.309/Rev.1), que contenía dos modificaciones. Después del párrafo 5 de la parte dispositiva, se había insertado un nuevo párrafo que comenzaba con las palabras: "*Deplora* cualquier arreglo de carácter defensivo que el Reino Unido pudiera concertar..." Convendría que en dicho párrafo se estipulara que tales arreglos sólo podían ser concertados por Estados soberanos, y no por una Potencia Administradora ni por gobiernos representativos. No tendría ningún sentido vincular obligatoriamente al Territorio a una Potencia que lo había gobernado durante casi 130 años.

359. La segunda modificación figuraba en el párrafo 12 de la parte dispositiva (anterior párrafo 11). En el texto revisado no se especificaba la composición de la misión especial para Adén, por considerarse que el Secretario General no debía verse limitado a los Estados miembros del Comité Especial al decidir la composición de la misión sino que debía disponer de mayor libertad para ello. Dicho cambio se había hecho basándose en las disposiciones de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General en la cual, entre otras cosas, se pide al Secretario General "que adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la aplicación de la presente resolución e informe al Comité Especial sobre el particular"; se habían tenido en cuenta además las intenciones del Secretario General, expresadas en los párrafos 6 y 7 de su informe (véase anexo III). No obstante, se había considerado que, para el cumplimiento del mandato que se le asignaba en las resoluciones pertinentes, convendría que el Comité Especial diera al Secretario General cierta orientación sobre sus nuevas tareas.

360. A fin de asegurar el éxito de la misión especial prevista en el párrafo 12 de la parte dispositiva era esencial asimismo que, antes que esa misión comenzara su labor en el Territorio, el Gobierno del Reino Unido diera cumplimiento a las disposiciones previstas en el párrafo 3 de la parte dispositiva y cooperara con las Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. A ese respecto, era de esperar que el Secretario General señalara la imperiosa necesidad de que la Potencia Administradora allanase el camino a la misión especial, declarando que aceptaba las resoluciones pertinentes y deseaba aplicar las disposiciones de las mismas. De lo contrario, la tarea de la misión tropezaría con graves dificultades.

361. Era de esperar que, al designar la misión especial, el Secretario General consultara al Comité Especial y transmitiera las opiniones y observaciones de

éste a la misión especial, pues el futuro del Territorio dependería del éxito de la labor que se realizara. Era de esperar asimismo que el Secretario General, al nombrar a los miembros de la misión especial, incluyera entre ellos a miembros del Comité Especial, cuya experiencia había de ser sumamente valiosa. Al cumplir su cometido la misión especial no debía limitarse a celebrar consultas con la Potencia Administradora sino que debía tratar de hacerlo con una muestra lo más amplia posible de la población, elegir la forma más adecuada para esas conversaciones, y extender las consultas, en lo posible, afuera del Territorio. Era de esperar que, cuando la misión especial hubiera finalizado su tarea y presentado su informe, el Secretario General agregara sus propias observaciones y recomendaciones al transmitirlo al Comité Especial. La misión especial debía ser nombrada lo antes posible y trasladarse al Territorio sin demora. A pesar del poco tiempo de que se disponía, el informe debía estar preparado antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General, si bien, naturalmente, se dejaba al criterio de la misión especial determinar cuándo y cómo había de presentar su informe.

362. Por último, el Subcomité de Adén mantendría su *statu quo*, ya que no se había decidido disolverlo; su mandato seguiría siendo el mismo. El cometido de la misión especial era muy diferente y de una naturaleza particular, y su mandato concreto era determinar la participación de las Naciones Unidas en las próximas elecciones en el Territorio. El Subcomité de Adén seguiría informando al Comité Especial sobre la evolución en el Territorio.

363. El representante de Madagascar dijo que lamentaba no haber podido patrocinar el proyecto de resolución, presentado por diez miembros del Comité, tanto más cuanto que el texto de dicho proyecto correspondía en gran parte a las ideas de la delegación de Madagascar sobre la cuestión de Adén. En efecto, esa delegación había puesto siempre en guardia al Reino Unido contra las elecciones que no dieran el poder a un gobierno representativo de los deseos de la población, había hecho un llamamiento a ese país para que aplicara las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y era partidaria del traspaso del poder a un gobierno elegido por el pueblo. Por esos motivos, suscribía plenamente las disposiciones del párrafo 8 del proyecto de resolución y la totalidad del texto; no obstante, debía formular ciertas reservas sobre el párrafo 5. En efecto, este párrafo equivalía a tomar posición sobre una cuestión en cierto modo puramente privada. Debería verse en qué medida la conferencia prevista en el párrafo 5 era incompatible con las resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General. *A priori*, no se apartaba de ellas, ni se exceptuaba que la invitación no proviniera de la Potencia Administradora. El Comité Especial podía hacer una advertencia al Gobierno del Reino Unido y subrayar que éste no se atenía a las decisiones de las Naciones Unidas, pero no podía adoptar una posición en favor de grupos privados. El representante de Madagascar señaló que las demás disposiciones del proyecto de resolución que se examinaba eran satisfactorias para su delegación.

364. La representante de los Estados Unidos de América declaró que en el pasado su delegación no había podido apoyar varias resoluciones por considerar que las mismas no eran equilibradas y no reflejaban la verdadera situación. En dichas resoluciones se condenaba al Reino Unido por haber adoptado medidas para

suprimir los actos de terrorismo y de violencia sin condenar al mismo tiempo a esos actos. Además, se pedía la independencia inmediata pero no se mencionaban los progresos realizados hacia ese objetivo.

365. La delegación de los Estados Unidos no podía dar su apoyo al proyecto de resolución que se examinaba por motivos análogos. En él se pedía al Reino Unido que pusiera término a las medidas militares y civiles pero no se deploraban los actos de terrorismo y de violencia que obligaban al Reino Unido a adoptar esas medidas. No se mencionaban los progresos realizados hacia la independencia ni se reconocían las medidas adoptadas por el Secretario General en el cumplimiento del mandato que se le había confiado.

366. El Gobierno de los Estados Unidos acogía con beneplácito los esfuerzos realizados por el Reino Unido y por el Gobierno de la Federación y su disposición a aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas. No aceptaba la afirmación de que todos aquellos que no estaban de acuerdo con ciertas medidas debieran ser calificados como verdaderos patriotas y los que estaban de acuerdo como simples títeres; por consiguiente, no podía rechazar como "simples maniobras británicas" los actos encaminados al arreglo pacífico y democrático de las controversias.

367. El representante de Italia estimó que en el proyecto de resolución la situación se había evaluado con una perspectiva que su delegación no podía aceptar. Se había pintado al Reino Unido violando las resoluciones de las Naciones Unidas, dedicado al terrorismo en la región y poniendo en peligro la paz mundial. No correspondía al Comité Especial determinar quién tenía o no razón, establecer quién era responsable de la situación de inquietud, determinar si el Reino Unido se había excedido en sus facultades legítimas para el mantenimiento de la ley y el orden en el territorio, ni decidir la calificación de las guerras de liberación nacional con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, cuya esencia era la solución de las controversias políticas por medios pacíficos. Se trataba de cuestiones sumamente controvertidas sobre las cuales sería difícil llegar a una solución generalmente aceptable. No obstante, la delegación de Italia consideraba que en el proyecto de resolución no se reflejaba la realidad de la situación, y reservaba su posición al respecto.

368. En segundo lugar la delegación de Italia no creía que el Comité Especial estuviera facultado para tomar partido — ni debía hacerlo — en cuestiones de detalle como, por ejemplo, recomendar que se siguiera un determinado procedimiento para aplicar las resoluciones de la Asamblea General o que se celebraran ciertas consultas. En el pasado se había dicho muchas veces ante el Comité Especial que la independencia que se proyectaba conceder a determinado territorio no era "auténtica". El Comité Especial no había intervenido en los asuntos internos de esos territorios no autónomos y haría muy bien en seguir esa práctica al examinar la cuestión de Adén.

369. La delegación de Italia no podía apoyar el párrafo 5 de la parte dispositiva que negaba la necesidad de lograr un alto grado de acuerdo entre todos los sectores de la población. Estos debían estar satisfechos de que se celebraran elecciones generales bajo la garantía de las Naciones Unidas, y debía dejarse a los Miembros de la Asamblea General que prepararan una nueva constitución sin insistir en requisitos ni condiciones previos.

370. En tercer lugar la delegación de Italia consideraba necesario que las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General, desempeñaran un papel decisivo en la independencia pacífica de Arabia Meridional. Sin embargo, no creía que el párrafo 11 de la parte dispositiva, ni siquiera en la forma revisada que se había propuesto, facilitara dicha tarea. Añadió que tenía grandes dudas acerca de la competencia del Comité Especial para orientar al Secretario General y para señalar las formas concretas en que éste debía cumplir la tarea que le había asignado la Asamblea General. Temía asimismo que dicho párrafo pudiera interpretarse como una limitación de la libertad de acción del Secretario General, o como una falta de confianza en el juicio de éste.

371. Si bien existía un considerable acuerdo sobre el fondo de la cuestión que se estaba examinando, la delegación de Italia lamentaba no poder apoyar el proyecto de resolución, por los motivos expuestos.

372. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que, por ser uno de los patrocinadores del proyecto de resolución (A/AC.109/L.309/Rev.1), se sentía obligado a explicar la posición de su delegación. Ninguno de los dos representantes que se oponían a dicha resolución había podido apoyar ninguna otra relativa a la independencia de los territorios bajo administración extranjera. Se habían cruzado palabras fuertes: algunas delegaciones habían condenado la negativa de otras de apoyar el proyecto de resolución, y dos representantes habían encontrado, por su parte, fallas en la resolución, y por ende en sus autores al considerar inadecuados algunos aspectos. En primer lugar, habían lamentado la falta de un párrafo en que se dieran las gracias al Secretario General. Esta crítica había sido injusta, pues todos los miembros del Comité Especial habían expresado su agradecimiento al Secretario General por su actuación y habían dado la bienvenida al Sr. Adeel a la sala del Comité. Sin embargo, habría sido imposible incorporar ese agradecimiento y esa bienvenida en la resolución, porque el Representante Especial del Secretario General sólo estaba en la sala para escuchar las deliberaciones del Comité e informar al Secretario General. Su presencia era de momento sólo una medida parcial, motivo por el cual todo reconocimiento o gratitud deberían expresarse cuando la medida iniciada estuviera completa. Era suficiente reconocimiento el que el Comité pidiera al Secretario General que adoptara nuevas medidas, lo cual reflejaba su confianza en él. Esa petición y esa confianza podrían figurar en el informe del Representante Especial.

373. Las delegaciones que se oponían a la resolución habían señalado también que la expresión "gobierno títere" era excesivamente fuerte. El representante de Tanzania esperaba que en esas circunstancias alguien trataría de demostrar que el Gobierno en cuestión había sido verdaderamente elegido por el pueblo. Sin embargo, se había demostrado que los sultanes de Arabia Meridional habían sido designados por el Gobernador, cuyo poder era tan grande que de un plumazo se podía eliminar o restaurar a un funcionario como el Sr. Mackawee. Cuando quien empuñaba una pluma de tal poder era una Potencia colonial, el gobierno interesado era, evidentemente, un régimen títere. Los representantes que se habían opuesto a la resolución representaban a países con una larga tradición de democracia, y debían comprender que un régimen es-

tablecido en esa forma, sin elecciones libres por parte de la población, era sin duda un gobierno títere.

374. El representante de Italia había sugerido que el pedir una medida determinada no entraba en las atribuciones del Comité Especial cuando en realidad en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea General, que se refería al Comité Especial, se disponía que éste prosiguiera su labor y continuara investigando los medios más apropiados para aplicar las resoluciones pertinentes. Además, en el párrafo 6 de la parte dispositiva se pedía al Comité que prestara suma atención a los territorios pequeños. Por consiguiente, el Comité Especial estaba actuando dentro de sus atribuciones al recomendar al Secretario General que adoptara determinadas medidas, es decir, que designara una misión especial cuyo informe sería transmitido a la Asamblea General por conducto del Comité Especial.

375. Uno de los que se habían opuesto al proyecto de resolución había hecho objeciones a que se reconocieran las guerras de liberación. Había habido desacuerdo general con ese representante pues la revolución de Adén constituía una reacción justificada contra el colonialismo, que era en sí una forma de agresión.

376. Finalmente, las delegaciones que se oponían a la resolución habían hablado de su imposibilidad de apoyar las resoluciones sobre Adén en el pasado. Si los peticionarios hubieran indicado al Comité Especial que la acción propuesta no era la que más convenía a los intereses de Adén, o si el resto del Comité hubiese rechazado la totalidad de la resolución, podría haber cierta duda en cuanto a la justificación de la misma. El apoyo incondicional de los peticionarios y del resto del Comité, empero, habían dado a éste una victoria moral, en otras palabras, la plena seguridad de que estaba haciendo lo que debía hacer.

377. Además, el hecho de que el gobierno títere hubiera indicado que estaba dispuesto a buscar mediante una conferencia los medios de aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas, era una prueba convincente de que las medidas propuestas gozaban de aceptación general. Era inconcebible que, cuando el régimen títere y la Potencia Administradora estuvieran buscando los medios de aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas, países que no tenían en juego intereses coloniales se opusieran al proyecto de resolución.

378. Si las mismas delegaciones considerasen que las Naciones Unidas iban demasiado lejos, los patrocinadores deberían contestar que no se habían propuesto esbozar una constitución para Adén, iniciativa que correspondía únicamente a la población de ese Territorio. Las Naciones Unidas trataban simplemente de crear un clima propicio a las elecciones debidas para lograr un gobierno representativo del pueblo, como había hecho con éxito en el pasado, por ejemplo en el caso de Ruanda-Urundi.

379. Habría sido preferible que los contrarios al proyecto se abstuviesen de emplear palabras como "imprudente", que demostraban un juicio de valor infundado. El representante de Tanzania se preguntaba si los principios democráticos no dejaban a la mayoría la decisión de qué y quién era prudente. La República Unida de Tanzania, país que por cierto no podía calificarse de "gran Potencia", prefería pronunciarse como uno entre muchos partidarios activos de los derechos inalienables del hombre. Como tal, había apoya-

do el derecho y reconocido la capacidad de la población de Adén de gobernarse a sí misma, aún antes de 1968.

380. El representante del Secretario General señaló que la petición de designar inmediatamente una misión especial para Adén, dirigida al Secretario General en el párrafo 12 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado (A/AC.109/L.309/Rev.1), suponía consecuencias financieras y de otra índole. Sin embargo, al no disponer de una información precisa sobre el número de miembros que debería tener la misión especial, el Secretario General no estaba en condiciones de presentar una declaración sobre las consecuencias financieras, necesaria según el párrafo 13.1 del artículo XIII del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas. Deseaba informar en la etapa actual al Comité Especial que el Secretario General estudiaría la petición que le había sido dirigida en el párrafo 12 de la parte dispositiva, teniendo en cuenta las responsabilidades que se le confiaban en las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, y señalaría a la atención del Comité Especial en el momento oportuno las cuestiones que pudieran plantearse a ese respecto.

381. Seguidamente el Comité Especial aprobó en votación nominal el proyecto de resolución revisado (A/AC.109/L.309/Rev.1), por 18 votos contra 2 y 2 abstenciones. El resultado de la votación fue como sigue:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Dinamarca, Italia.

382. El texto de la resolución (A/AC.109/179/Rev.1) que el Comité Especial aprobó en su 447.a sesión, celebrada el 15 de junio de 1966, dice así:

“El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

“Habiendo examinado la cuestión de Adén,

“Habiendo oído a los peticionarios,

“Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

“Recordando asimismo las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1963 y 5 de noviembre de 1965, respectivamente,

“Profundamente preocupado por la situación crítica y explosiva que amenaza la paz y la seguridad de Adén y de los Protectorados de Adén y que se debe a la política que la Potencia Administradora sigue en el Territorio,

“Lamentando que la Potencia Administradora se haya negado a aplicar las resoluciones de la Asamblea General relativas al Territorio de Adén y Protectorados de Adén,

“Recordando las diversas exposiciones y declaraciones hechas por la Potencia Administradora del Territorio,

“1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libertad e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

“2. Deplora que la Potencia Administradora haya establecido un régimen no representativo en el Territorio, con miras a conceder la independencia en violación de las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII) de la Asamblea General, y hace un llamamiento a todos los Estados para que reconozcan la independencia que no esté basada en los deseos del pueblo del Territorio libremente expresados en elecciones celebradas mediante el sufragio universal de los adultos;

“3. Pide a la Potencia Administradora que declare inequívocamente su aceptación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, así como su disposición a cooperar con las Naciones Unidas en su inmediata aplicación;

“4. Reafirma la opinión de que las responsabilidades que incumben al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en su carácter de Potencia Administradora no pueden ser traspasadas o eludidas mediante cualquier acción de un régimen no representativo a que se hace referencia en el párrafo 2 supra;

“5. Declara, en consecuencia, que la conferencia prevista en el documento A/AC.109/161/Add.1/Rev.1 o cualquier otra conferencia de índole similar no está en conformidad con los términos de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

“6. Deplora cualquier arreglo de carácter defensivo que el Gobierno del Reino Unido pudiera concertar con el régimen no representativo del Territorio, y considera que los arreglos de esa índole son incompatibles con los propósitos de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y constituyen un grave obstáculo para el libre ejercicio, en lo futuro, del derecho a la libertad e independencia por el pueblo del Territorio;

“7. Observa con profunda preocupación que la Potencia Administradora sigue llevando a cabo operaciones militares contra el pueblo del Territorio;

“8. Encarece a la Potencia Administradora que proceda inmediatamente a:

“a) Poner fin al estado de excepción;

“b) Derogar todas las leyes que coartan las libertades públicas;

“c) Hacer cesar toda acción represiva contra el pueblo del Territorio y, en particular, las operaciones militares;

“d) Poner en libertad a todos los detenidos políticos y permitir que regresen las personas desterradas o deportadas por razones políticas;

“9. Pide encarecidamente a todos los Estados Miembros que presten toda la ayuda posible al pueblo del Territorio en sus esfuerzos por lograr la libertad y la independencia;

“10. Señala a la atención del Consejo de Seguridad la peligrosa situación que existe en la zona

como consecuencia de las acciones militares británicas contra el pueblo del Territorio;

"11. *Invita de nuevo* al Secretario General a que celebre consultas con los organismos especializados y otras organizaciones internacionales con el fin de prestar ayuda a los refugiados procedentes del Territorio de Adén y Protectorados de Adén;

"12. *Pide* al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia Administradora, designe inmediatamente una misión especial para Adén con el fin de que recomiende las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, en especial, determine el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, y le presente a la mayor brevedad posible un informe para transmitirlo al Comité Especial;

"13. *Decide* mantener la cuestión de Adén en su programa."

383. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad el 15 de junio de 1966⁸.

G. NUEVO EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁹

Introducción

384. El Comité Especial volvió a debatir la cuestión de Adén en sus 462a. y 473a. sesiones celebradas el 16 de agosto y el 19 de octubre de 1966. Tuvo a la vista el informe del Secretario General de fecha 5 de agosto de 1966, que figura como anexo V al presente capítulo, relativo al nombramiento de una misión especial con arreglo al párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité en su 447a. sesión, celebrada el 15 de junio de 1966 (véase párr. 382 *infra*). En el curso de ese debate el representante de Yugoslavia, Presidente del Subcomité de Adén, comunicó en un informe verbal la opinión del Subcomité acerca del informe del Secretario General.

Peticiones escritas

385. A continuación se indican las peticiones escritas adicionales, relativas al Territorio, que el Comité Especial tuvo a la vista¹⁰.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Sr. Awadh Abdulla Arashani, en nombre de los estudiantes de la Arabia Meridional Ocupada ..	A/AC.109/PET.496/Add.1
Sr. Abdulla Bakerman, Secretario Administrativo del Arab Socialist Party de Hadramout	A/AC.109/PET.504/Add.1

⁸ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1966, documento S/7372.*

⁹ Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) para más detalles sobre el debate en cuanto a la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a los territorios examinados por el Comité en el África.

¹⁰ Las siguientes peticiones fueron distribuidas después que el Comité Especial había examinado la cuestión de Adén en sus sesiones 462a. y 473a.: A/AC.109/PET.470/Add.1; A/AC.109/PET.564 a 566.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Sr. Awad Bin Saleh, Sultán del Estado Quaiti de Hadramout ..	A/AC.109/PET.518
Despacho del Presidente de la Conferencia de las Tribus de la Región Occidental, Hadramout	A/AC.109/PET.519
Sr. Dagobert Krause, en nombre de la Internacional de Sindicatos de Empleados Públicos, de Frankfurt	A/AC.109/PET.520
Sr. Khaled Aljundi, Presidente de la Conference of Solidarity and Support for the People and Workers of Aden, Damasco ..	A/AC.109/PET.521
Dos peticiones del Front for the Liberation of Occupied South Yemen (FLOSY)	A/AC.109/PET.469/Add.2
Sr. Abdul Qawi Mackawee, Secretario General (FLOSY) ..	A/AC.109/PET.469/Add.3
Presidente y miembros del Concejo Municipal de Adén	A/AC.109/PET.470/Add.1
Sr. S. A. Alhabshi, Secretario General de la South Arabian League (SAL)	A/AC.109/PET.480/Add.2
Sr. Salim Alsafi, Vicepresidente (SAL)	A/AC.109/PET.480/Add.3
South Arabian League (SAL) ..	A/AC.109/PET.480/Add.4
Jequ Hussein Mansour, Presidente y Gobernante del Estado de Dathina	A/AC.109/PET.522
Sr. Admed Fadhl Saidi y otros en nombre de los ciudadanos de Dathina en Adén	A/AC.109/PET.523
Sres. Ahmad Abdullah Al Fadhlí y Je'bel bin Hussein Al Audhali .	A/AC.109/PET.524 y Add.1
People of South Arabia in Riyadh	A/AC.109/PET.564
Spearhead of Farmers in Abyan	A/AC.109/PET.565
People of Dhala Emirate	A/AC.109/PET.566

Declaraciones generales de los miembros

386. El representante del Irak observó que la resolución aprobada por el Comité Especial el 15 de junio de 1966 (véase párr. 382 *supra*) contenía tres puntos importantes. En primer lugar, en los párrafos 2 y 4 de la parte dispositiva se observaba que el régimen existente en el Territorio no era representativo y, por consiguiente, no podría ser reconocido como válido por el Comité Especial o las Naciones Unidas. En segundo lugar, en el párrafo 3 de la parte dispositiva se pedía a la Potencia Administradora que declarara inequívocamente su aceptación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, así como su disposición a cooperar con las Naciones Unidas en su inmediata aplicación. En tercer lugar, en el párrafo 12 de la parte dispositiva se pedía al Secretario General que designara una misión especial con el fin de que recomendase las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de dichas resoluciones.

387. Añadió que en la carta dirigida al Secretario General por la delegación del Reino Unido (véase anexo V, párr. 6), se acogía con beneplácito la ayuda y participación de las Naciones Unidas en la tarea de lograr la realización de la política declarada del Gobierno de Su Majestad de llevar a Arabia Meridional a la independencia; en otros términos, el Reino Unido todavía tenía la intención de conceder la independencia al régimen no representativo que se hallaba en el poder.

La carta hablaba de tratados que, como sabía muy bien el Comité Especial, no eran más que tratados entre el conquistador y el conquistado y no podrían considerarse como obligaciones internacionales; más aún, el Artículo 103 de la Carta ponía en claro que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas en virtud de la Carta y las obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerían las primeras. El Gobierno del Reino Unido sostenía en su carta que sus responsabilidades se limitaban a las relaciones exteriores, la defensa y "la administración pública", expresión esta última que podía interpretarse en muchos sentidos. En virtud del Artículo 73 de la Carta el Gobierno del Reino Unido tenía la obligación de transmitir al Secretario General información sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios no autónomos por los cuales era responsable; por consiguiente, difícilmente podría sostener que sus responsabilidades se limitaban a las relaciones exteriores y la defensa.

388. En el último párrafo de la carta se trataba evidentemente de confirmar que la misión designada actuaría dentro de las condiciones establecidas previamente, y difícilmente podría llamarse esto una aceptación inequívoca de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, según se pedía en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la última resolución aprobada por el Comité Especial (véase párr. 382 *supra*). En dicha resolución se calificaba el régimen existente en el Territorio como no representativo; sin embargo, el Gobierno del Reino Unido insistía en que toda misión tendría que colaborar con dicho régimen. Además, la carta del Reino Unido hacía referencia únicamente a la parte dispositiva de las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, y no mencionaba la resolución 1514 (XV), seguramente porque el aceptar dicha resolución interferiría con las ideas propias acerca de la concesión de la independencia al pueblo de Adén.

389. Tal vez algunos miembros del Comité Especial estimaban que éste debería convenir en designar una misión especial sin más demora, pero la misión sería inútil si se aceptaran las condiciones establecidas por el Reino Unido. Todos los textos pertinentes se habían referido a la plena aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, y a la aceptación inequívoca, de parte del Reino Unido, de dichas resoluciones; en consecuencia, sería inútil nombrar una misión mientras el Reino Unido no estuviera dispuesto, en primer lugar, a aceptar inequívocamente las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Comité Especial y, en segundo lugar, a aceptar la plena aplicación de dichas resoluciones sin condiciones previas.

390. El representante de Dinamarca declaró que la cuestión fundamental sometida al Comité Especial era determinar si el Secretario General podría enviar una misión de las Naciones Unidas a Arabia Meridional. Hasta la fecha, el Secretario General había celebrado consultas privadas y oficiosas con los miembros del Comité Especial y con el Reino Unido. De la carta del Reino Unido se desprendía claramente que se habían hecho progresos importantes en esos dos puntos esenciales. El Reino Unido había aceptado ya las partes dispositivas de dos resoluciones de la Asamblea General, atendiendo así a las solicitudes hechas por varias delegaciones; si bien las había aceptado con reservas, no era seguro que esas reservas constituirían un obs-

táculo en el camino de la misión. Por otra parte, tal vez por primera vez había acogido ese país con beneplácito el envío de una misión de las Naciones Unidas a uno de sus territorios dependientes que no era un territorio en fideicomiso. La delegación danesa celebraba la iniciativa del Reino Unido y esperaba que todos los miembros del Comité hicieran lo mismo. Esperaba también que un acontecimiento tan prometedor no se marchitara en flor. Las discusiones públicas sobre la cuestión, en las que no era probable que se hicieran concesiones, difícilmente podrían permitir una conclusión fructífera. El orador estaba firmemente persuadido, pues, de que la mejor forma de discutir la cuestión consistía en que se celebraran consultas oficiosas entre el Secretario General, el Reino Unido y el Presidente del Comité Especial.

391. Sin embargo, el Comité Especial debería poner en claro, tal vez mediante una declaración del Presidente, que su objetivo primordial era asegurar que la misión de las Naciones Unidas se enviara a Adén con objeto de prestar asistencia en el proceso hacia la independencia y que esperaba que todas las partes interesadas colaborasen con ese fin. La delegación danesa haría también un llamamiento a todos los miembros para que apoyaran la opinión de que debían celebrarse en privado nuevas consultas, hasta que hubiera quedado establecido que era posible un acuerdo acerca de la cuestión de enviar una misión a Adén; sólo entonces sería adecuado celebrar un debate público sobre el tema.

392. El representante de Yugoslavia, hablando en su calidad de Presidente del Subcomité de Adén, declaró que el Subcomité se había reunido y había revisado la situación del Territorio a la luz de los últimos acontecimientos. Había tomado nota de que el Reino Unido estaba dispuesto a colaborar con la misión especial que se enviase a Adén. No obstante, consideraba que las reservas del Reino Unido, según constaban en los párrafos 2, 3 y 4 de su carta al Secretario General (véase anexo V) no se ajustaban a las resoluciones de la Asamblea General y el Comité Especial. La actitud del Reino Unido no era aceptable como una base sobre la cual una misión especial para Adén podría ser designada o podría actuar. La misión especial debía constituirse y actuar únicamente con arreglo a los términos de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, así como de la resolución aprobada por el Comité Especial en El Cairo el 15 de junio de 1966, y una vez que el Reino Unido hubiese aceptado inequívocamente dichas resoluciones.

393. El representante de Bulgaria dijo oponerse a la opinión del Reino Unido de que la cuestión sometida al Comité Especial debía examinarse únicamente en consultas privadas. La propia delegación del Reino Unido había dirigido al Secretario General una carta, que ocupaba en aquel momento al Comité; más aún, había suscitado la cuestión de Adén en el Consejo de Seguridad, bajo la forma de una reclamación redactada de manera más bien vaga, y había formulado una solicitud análoga para la designación de una misión especial, con la esperanza de que su propia posición fuese confirmada. En consecuencia, difícilmente podría sostenerse que la cuestión no debía examinarse públicamente. Si el Comité Especial conviniese únicamente en examinar las cuestiones cuando ello conviniera al Reino Unido, tal vez resolviese de esa forma los problemas del Reino Unido, pero difícilmente podría resol-

ver los problemas de los pueblos interesados. Por consiguiente, el Presidente había actuado acertadamente al permitir la continuación del debate.

394. En el primer párrafo de la carta del Reino Unido (véase anexo V) se declaraba que el Gobierno de ese país acogía con beneplácito la ayuda y participación de las Naciones Unidas en la realización de su política declarada de llevar a Arabia Meridional a la independencia. Pero si ello suponía que las Naciones Unidas aceptaban la política del Reino Unido sobre la cuestión, el orador quería señalar que todas las resoluciones pertinentes aprobadas por el propio Comité Especial y por la Asamblea General indicaban un desacuerdo con esa política. Sería un tanto excesivo suponer que el Comité estaba ofreciendo ayuda al Reino Unido para llevar a cabo una política que ha sido inequívocamente rechazada por la Asamblea General.

395. Añadió que en la carta se declaraba que el Gobierno del Reino Unido estaba obligado por los tratados existentes con la Federación de Arabia Meridional, lo que, evidentemente, era contrario a la declaración de que el Reino Unido aceptaba las cláusulas de la parte dispositiva de la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General y, en particular, la resolución 2023 (XX), en la que deploró el intento de la Potencia Administradora de establecer un régimen no representativo en el Territorio. Así, pues, el Gobierno del Reino Unido estaba pidiendo al Comité Especial y a la Asamblea General que repudiaran sus propias resoluciones y su política declarada de descolonización. Estaba pidiendo a las Naciones Unidas no sólo que aceptaran la existencia de un régimen no representativo, sino también que refrenaran todos los tratados militares y de otra índole que había concertado con su gobierno títere en la Arabia Meridional a fin de perpetuar su dominación en dicho país. Era perfectamente evidente que ni la Asamblea General ni el Comité Especial podían aceptar dicha solicitud.

396. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido iba más lejos aún y declaraba que no estaba constitucionalmente en condiciones de dar directivas al Gobierno Federal, salvo en lo atinente a las relaciones exteriores, la defensa y la administración pública, y carecía de facultades para imponer cambios en la Constitución Federal. Esta declaración suponía que la aceptación de la Federación y de su régimen constituía un requisito previo para la colaboración del Reino Unido. Las reservas expuestas por el Reino Unido no eran aceptables, ya que constituirían un abandono de las disposiciones más importantes de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y su oferta de cooperar con la misión de las Naciones Unidas debería considerarse meramente como una maniobra.

397. Debería definirse claramente el mandato de la misión especial, ya que tenía una finalidad definida, a saber, la de asegurar la plena aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Si el Reino Unido deseaba verdaderamente cooperar con la misión de las Naciones Unidas para Adén, debería aceptar incondicionalmente y sin reservas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las del Comité Especial. Solamente así podría la misión actuar adecuadamente; a falta de esa aceptación, sería inútil enviar una misión a Adén.

398. El representante de Siria señaló que el mandato de la propuesta misión a Adén estaba claramente definido en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la

resolución aprobada por el Comité Especial (véase párr. 382 *supra*). La misión había de recomendar las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, determinar el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones y presentar a la mayor brevedad posible un informe para transmitirlo al Comité Especial. Este mandato no debería estar sometido a ninguna condición o reserva que limitase su alcance o restringiese su campo de acción.

399. Las consultas mencionadas en el mismo párrafo de la parte dispositiva deberían referirse únicamente a la cuestión del nombramiento de la misión especial, como se aclaraba en el párrafo 5 del informe del Secretario General (véase anexo V). La Potencia Administradora estaba facultada para consultar con los miembros de la misión, pero no debería formular ninguna condición o reserva que limitase el mandato de esta última.

400. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que el hecho de que la cuestión de Adén figurara todavía en el programa del Comité Especial demostraba el fracaso de la diplomacia privada para resolverla. Más aún, en una Organización que contaba ciento diecisiete Miembros y en un Comité de veinticuatro miembros, la diplomacia privada no podría empezar hasta que se hubiera oído la opinión de cada uno. El debate público había llevado al Reino Unido a aceptar la idea de una misión, y el orador esperaba que, si continuaba el debate, terminaría por aceptar todas las condiciones del Comité. Estaba plenamente de acuerdo con el análisis que hiciera el representante del Irak de la carta del Gobierno del Reino Unido, y apoyaba la opinión de los representantes de Yugoslavia, Bulgaria y Siria.

401. En el párrafo 12 de su resolución de 15 de junio de 1966 el Comité Especial había decidido claramente el propósito de la misión especial propuesta para Adén. Añadió que celebraba la declaración del Gobierno del Reino Unido de que le complacería colaborar con dicha misión, pero se preguntaba por qué había considerado necesario ese Gobierno especificar en el segundo párrafo de su carta que sus responsabilidades "no pueden ser limitadas ni abandonadas". No era intención del Comité limitar esas responsabilidades ni pedir al Reino Unido que las abandonara. La delegación de Tanzania no ponía en tela de juicio la responsabilidad del Reino Unido de mantener la seguridad hasta que llegase el momento en que la colonia de Adén alcanzara la independencia; pedía que el Gobierno del Reino Unido no hiciera un mal uso de dicha responsabilidad matando al pueblo de Adén. En segundo lugar, el Gobierno del Reino Unido había declarado que se hallaba "jurídicamente obligado por los tratados existentes con la Federación de Arabia Meridional". Pero como Adén era una colonia, tales tratados no podían obtener reconocimiento de parte de las Naciones Unidas, y toda referencia a ellos carecía de pertinencia en cuanto al objetivo de la resolución del Comité Especial.

402. Las referencias del Gobierno del Reino Unido a "las relaciones exteriores" y a "la defensa" estaban igualmente fuera de lugar. La República Unida de Tanzania se negaba a reconocer al Gobierno local de Adén por lo mismo que no era representativo. Más aún, la división del poder entre dicho Gobierno y el

Gobierno del Reino Unido no interesaba al Comité Especial salvo en el sentido de que si ello suponía que la misión de las Naciones Unidas tendría que tratar con más de una autoridad en el Territorio, su labor podría resultar inútil. Debería quedar claramente entendido que cuando la misión fuese a Adén, tendría que tratar con una sola Potencia, a saber, la Potencia Administradora.

403. El Gobierno del Reino Unido hablaba del acuerdo acerca de la composición de la misión. Ese punto debería estar cubierto por la referencia, incluida en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución, a las consultas con la Potencia Administradora; cabía esperar que el Gobierno del Reino Unido no insistiría en que sería menester su asentimiento para el nombramiento de cada uno de los miembros de la misión — y de todos ellos — por el Secretario General. El Gobierno del Reino Unido afirmó asimismo que “carece de facultades para imponer cambios en la Constitución Federal”. No era finalidad de la propuesta misión especial el entablar conversaciones constitucionales; la Constitución era una cuestión que el pueblo de Adén debía decidir con el Gobierno del Reino Unido, y las Naciones Unidas sólo podrían desempeñar un papel de pacificación.

404. A continuación exhortó al Gobierno del Reino Unido a que se abstuviera de insistir en esos puntos de menor importancia, de forma que la misión especial pudiese dirigirse a Adén y el Comité Especial pudiera proseguir sus trabajos, cuyo objetivo consistía en asegurar la buena voluntad del pueblo de Adén y en ayudarlo a alcanzar la independencia en las mejores condiciones posibles. Teniendo en cuenta que todas las partes en la cuestión de Adén aceptaban en ese momento el papel de las Naciones Unidas, y lo hacían incondicionalmente, cabía esperar que el Reino Unido no insistiera en imponer condiciones que impedirían a la Organización desempeñar dicho papel.

405. El representante de la India indicó que como la opinión de la Potencia Administradora se había publicado oficialmente, su delegación era partidaria de un debate público y oficial sobre el informe del Secretario General. La delegación de la India aceptaba las conclusiones del Subcomité de que las reservas de la Potencia Administradora no eran compatibles con las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial y de que la actitud del Gobierno del Reino Unido no se podría aceptar como base para la formación de una misión visitadora. Sin embargo, la buena disposición de la Potencia administradora de cooperar con las Naciones Unidas, aunque limitada por ciertas condiciones, era un importante punto de partida y convenía hacer todo lo posible por asegurar el envío de una misión a Adén. La situación en el Territorio estaba evolucionando rápidamente y sería muy útil contar con información directa al respecto. Mas la delegación de la India convenía con el representante del Irak y el Subcomité de Adén en que esa misión no podría funcionar si se limitaba de antemano su autoridad con condiciones inaceptables. Por lo tanto, el orador compartía la esperanza del representante de Tanzania de que el Gobierno del Reino Unido no insistiría en las reservas mencionadas en su carta. Esperaba que el Representante Permanente del Reino Unido regresara a Nueva York con nuevas instrucciones que permitieran la designación de una misión visitadora en condiciones aceptables para el Secretario

General, el Comité Especial y la Potencia Administradora.

406. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estimaba que el Comité debería mantenerse al corriente de los acontecimientos relacionados con el problema de la liquidación del régimen colonial en Adén y en Arabia Meridional y, en consecuencia, efectuar un debate público sobre el informe del Secretario General. Su delegación agradecía los esfuerzos que el Secretario General hacía por aplicar las resoluciones de la Asamblea General sobre Adén y la resolución del Comité Especial de 15 de junio de 1966.

407. La delegación de la Unión Soviética apoyaba también el análisis de la carta del Gobierno del Reino Unido hecho por el representante del Irak. De esa carta se desprendía claramente que el Reino Unido se negaba todavía a aceptar las decisiones de las Naciones Unidas sobre Adén y se empeñaba en mantener en el poder a su régimen títere y en privar a los representantes de Adén y de Arabia Meridional de su derecho a la verdadera independencia, en conformidad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

408. Entre las reservas expresadas por el Gobierno del Reino Unido acerca de la cuestión de la cooperación con la misión de las Naciones Unidas figuraba una que equivalía a pedir el reconocimiento del actual tratado del Reino Unido con la llamada Federación de Arabia Meridional y con algunas otras sultanías. El propósito táctico de la diplomacia británica en este momento era conseguir que las Naciones Unidas reconociesen al “Gobierno Federal” títere que había impuesto a los habitantes del Territorio pero que no representaba a nadie. Por ese motivo el Reino Unido sólo aludía en su carta a las resoluciones de la Asamblea General y guardaba completo silencio respecto de la resolución del Comité Especial, en la que el Comité deploraba el establecimiento de un régimen no representativo en el Territorio y reafirmaba la opinión de que las responsabilidades que incumbían al Reino Unido como Potencia Administradora no podían ser transferidas o eludidas mediante ninguna acción de un régimen no representativo. La misma resolución deploraba también cualquier arreglo de carácter defensivo concertado con el régimen no representativo, por considerarlo un grave obstáculo para el libre ejercicio del derecho del pueblo de Adén a la libertad y a la independencia.

409. El Gobierno del Reino Unido declaraba además que no podía dar instrucciones al Gobierno Federal salvo en cuestiones externas, de defensa y de administración pública, y que no tenía autoridad para modificar la Constitución Federal. En otras palabras, dicho Gobierno trataba de renunciar a su responsabilidad de velar por la futura evolución de los asuntos internos del Territorio, e ilegalmente confería al Gobierno federal amplios poderes, incluso, evidentemente, poderes para organizar y celebrar elecciones en la colonia. Al mismo tiempo, afirmaba que sin el consentimiento del Gobierno federal no podía introducir ninguna modificación en la injusta constitución que había impuesto al pueblo. Tal afirmación no podía tomarse seriamente, pues el Reino Unido, como Potencia Administradora, era responsable del Territorio. La reserva que hacía el Reino Unido respecto de su responsabilidad de velar por la seguridad, al igual que las demás, tenía por objeto mantener en el poder al

régimen títere y sofocar el movimiento nacional de liberación del Territorio.

410. El propósito general de las reservas era claramente incompatible con el de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Adén. El Reino Unido tenía la obligación de dar efectividad, sin condiciones ni reservas, a las disposiciones de las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General, y de cumplir así sus obligaciones para con el pueblo de Adén. De ahí se desprende que la nueva "iniciativa" del Reino Unido no era sino una maniobra calculada para adormecer la opinión pública mundial y ganar el tiempo necesario para imponer al pueblo de Arabia Meridional una falsa independencia como medio de preservar sus intereses económicos y estratégicos en esa importante parte del mundo.

411. Las Naciones Unidas debían participar en el proceso de descolonización de Arabia Meridional sólo a base de la estricta observancia de sus resoluciones. Si el Reino Unido estaba verdaderamente dispuesto a cooperar con las Naciones Unidas, debía retirar sus reservas y declarar inequívocamente que aceptaba plenamente las decisiones de las Naciones Unidas sobre Adén y que estaba dispuesto a aplicarlas. Si no lo hacía así, el envío de una misión especial al Territorio no lograría el objetivo declarado por las Naciones Unidas con respecto a Adén, es decir, la consecución de una auténtica independencia por el pueblo de Adén.

412. El representante de Australia declaró que, a juicio de su delegación, el Gobierno del Reino Unido deseaba sinceramente dar la independencia a Arabia Meridional en 1968 para que fuera un Estado unido y soberano. Sin embargo, el ambiente en el Territorio era de tal naturaleza que dicho Gobierno no había podido tomar las medidas necesarias para establecer ese Estado. Por lo tanto, Australia acogía con satisfacción el acuerdo del Gobierno del Reino Unido en el sentido de aceptar una misión visitadora, a reserva de ciertas condiciones enteramente razonables. El Comité Especial haría un perjuicio a las Naciones Unidas si no aceptase el ofrecimiento del Reino Unido. Debiera aprovecharlo por ser un paso importante que ofrecía la oportunidad de poner fin a la violencia, el temor y el asesinato y crear un nuevo Estado árabe independiente.

413. A juicio del orador la discusión privada solía ser más fructífera que el debate público, en el cual podían inflamarse las pasiones y olvidarse los intereses de la parte más directamente interesada: el pueblo.

414. El representante del Irán manifestó que su Gobierno opinaba que el problema de Adén sólo podría resolverse a base de la resolución del Comité Especial de 15 de junio de 1966 y de las resoluciones de la Asamblea General que lo habían precedido; que las disposiciones de esas resoluciones no podían ser modificadas por ninguna Potencia; y que un gobierno representativo era la única autoridad competente a la cual debía transferirse el poder en el momento de la independencia. La delegación del Irán apreciaba las medidas tomadas por el Secretario General para cumplir sus funciones conforme al párrafo 12 de la resolución del Comité Especial. El representante del Irán estimaba que el Secretario General haría bien en consultar además a los miembros del Comité Especial a quienes no había consultado todavía y en particular a los de los países pertenecientes a la misma región que Adén.

415. Aun cuando la posición del Reino Unido representaba algún progreso, sus reservas no se compaginaban con las resoluciones que el orador había mencionado, y su delegación apoyaba también el análisis que el representante del Irak había hecho de la carta del Gobierno del Reino Unido. El Irán no podía aceptar ninguna reserva que pudiese impedir el establecimiento de un gobierno representativo.

416. Añadió que, a su parecer, el Secretario General podría facilitar su labor pidiendo una aclaración de las reservas del Reino Unido. Si, como resultado de ello, resultaba evidente que le impediría en efecto realizar su labor, el Secretario General debiera entonces informar al Comité Especial. Si, por otra parte, esas reservas sólo representaban una posición preliminar y el Reino Unido no les atribuía una importancia tal que pudiera impedir el envío satisfactorio de una misión al Territorio, entonces convendría poner todo empeño en lograr una solución. En resumen, aun cuando las reservas no fuesen aceptables, no debería perderse la oportunidad de establecer la presencia de las Naciones Unidas en Adén. Hizo suyo el llamamiento del representante de Tanzania a la delegación del Reino Unido para que no insistiera en sus reservas.

417. El representante de Italia hizo observar que el informe del Secretario General no era sino un informe provisional y que la carta del Representante Permanente Adjunto del Reino Unido constituía un apreciable adelanto. Convenía hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo aceptable para todas las partes, y la delegación de Italia tenía plena confianza en la habilidad del Secretario General para realizar las negociaciones necesarias. Si se enviaba una misión de las Naciones Unidas a Adén, sería la primera enviada a un Territorio no autónomo y ello sentaría un precedente útil. Lo mejor sería continuar las consultas oficiosas ya que el debate público podía a veces perjudicar las negociaciones. El Presidente estaba ya en condiciones de transmitir los puntos de vista del Comité Especial al Secretario General. Aun cuando habían surgido divergencias de opinión, también existía un sentir unánime a favor de facilitar el envío de una misión a Adén. Sería preferible esperar el resultado de las nuevas negociaciones antes que el Comité llegase a una conclusión.

418. El representante de Malí dijo que no podía menos de preguntarse cuáles eran las verdaderas intenciones del Reino Unido. El 2 de agosto de 1966 el Gobierno del Reino Unido había pedido al Consejo de Seguridad que investigara algunos incidentes en Arabia Meridional. Sin embargo, el 1º de agosto de 1966 había enviado una carta al Secretario General, con condiciones inaceptables, respecto al envío de una misión especial al Territorio, condiciones que veladamente entrañaban un rechazo de las resoluciones de las Naciones Unidas. El representante de Malí abrigaba la esperanza de que el Gobierno del Reino Unido no hubiese cerrado las puertas a posibles negociaciones y de que el Subcomité de Adén continuara sus esfuerzos de manera que pudiese llegar a un acuerdo. Debería dejarse al criterio del Presidente del Comité Especial y del Secretario General la cuestión de decidir respecto al método que convendría adoptar.

419. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que su delegación había expresado siempre interés en el derecho a la libre determinación para el pueblo de Arabia Meridional y se congratulaba de las medidas adoptadas por el Reino Unido para lo-

grar ese fin. El Comité Especial, interesado en el cumplimiento de los principios de la libre determinación, no podría dejar de acoger con agrado la decisión de conceder la independencia a Arabia Meridional en 1968. Era importante que la independencia se lograra en condiciones de paz y con el asentimiento de todos los grupos de Arabia Meridional, y que no se impusiera desde el exterior. El Gobierno del Reino Unido había aceptado las cláusulas dispositivas de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a reserva de que se reconociera su continua responsabilidad jurídica en la región, y estaba dispuesto a cooperar con una misión enviada con objeto de recomendar los pasos necesarios para aplicar esas resoluciones de la Asamblea General y hacer sugerencias relativas al papel de las Naciones Unidas en el proceso electivo. El Gobierno de los Estados Unidos acogía con particular agrado la perspectiva de que las Naciones Unidas desempeñaran su papel en Arabia Meridional. El orador estaba convencido de que el Secretario General formularía, con el Gobierno del Reino Unido, las condiciones apropiadas para el envío de esa misión.

420. El representante de Túnez apuntó que el mandato que se había conferido al Secretario General, según lo dispuesto en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité Especial en su 477a. sesión (véase párr. 382 *supra*), era claro. Añadió que agradecía al Secretario General sus esfuerzos por darle efectividad. La carta de fecha 1º de agosto de 1966 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido era el primer caso en que ese país aceptaba en principio el envío de una misión de las Naciones Unidas a un territorio bajo su administración. El representante de Túnez lamentaba las reservas que el Reino Unido había formulado en esa carta, pero esperaba que no fueran más graves que las que solía expresar el Reino Unido cuando el Comité Especial examinaba la cuestión de Adén, y que no tuviera la intención de hacer ineficaz la misión de las Naciones Unidas. Por lo tanto, encareció al Secretario General que continuara las negociaciones con el Reino Unido a fin de hallar la manera de aplicar la resolución del Comité Especial. El envío de una misión ofrecería la oportunidad de establecer una cooperación útil entre la Potencia Administradora y las Naciones Unidas y facilitaría la realización de las aspiraciones del pueblo del Territorio. El orador apoyó el llamamiento dirigido por el representante de Tanzania al Reino Unido y manifestó la esperanza de que ese país prestase a la misión toda la ayuda necesaria para el desempeño de sus funciones.

421. El representante del Uruguay dijo que, a su juicio, las reservas que el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido había expresado en su carta al Secretario General no afectaban la posición básica de la delegación uruguaya ni la del Comité Especial. Era muy deseable que se enviara una misión a Adén y que se le diera completa libertad de acción, así como la oportunidad de obtener toda la información que necesitaba y llegar a sus propias conclusiones. Convenía tener eso en cuenta cuando se designaran los miembros de la misión. Debían continuar las negociaciones relacionadas con el envío de una misión. No era necesario que el Reino Unido aceptara primero todas las resoluciones de las Naciones Unidas en su totalidad. El envío de una misión a Adén podría ser una aportación importante a los esfuerzos del Comité Especial por lograr la plena independencia para el Territorio.

422. El representante de Venezuela manifestó que compartía la inquietud de los demás miembros del Comité Especial respecto a la carta dirigida al Secretario General por el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido. Para el bienestar del pueblo de Adén era necesario enviar una misión, y el representante de Venezuela abrigaba la esperanza de que el Reino Unido quisiera aceptar que el trabajo de una misión de esa índole no sería objetivo si se restringiese su mandato. Añadió que esperaba que se llegase a un acuerdo razonable de manera que fuera posible enviar una misión a Adén.

423. El Presidente anunció que transmitiría al Secretario General las ideas manifestadas por los miembros en la reunión.

424. En la misma fecha, el Presidente dio cuenta al Secretario General de lo que los miembros del Comité Especial habían expresado en la 462a. sesión.

425. En la 473a. sesión, el representante del Irak recordó que varias delegaciones habían considerado inaceptables las condiciones que el Gobierno del Reino Unido imponía para la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General relativas a Adén y en particular el envío de una misión especial al Territorio. El Subcomité de Adén, al igual que muchas delegaciones, había considerado que no debía nombrarse ninguna misión mientras el Reino Unido no hubiera aceptado las resoluciones pertinentes sin ningún tipo de condiciones o reservas. El representante del Irak preguntó si el Secretario General o su representante podrían informar al Comité Especial acerca de los más recientes acontecimientos en la cuestión.

426. El representante del Irak expresó la esperanza de que no se tomaría ninguna decisión acerca de la designación de la misión especial hasta que el Gobierno del Reino Unido hubiera retirado sus reservas en una declaración clara y por escrito.

427. El Presidente dijo que ya había señalado las opiniones de los miembros del Comité Especial a la atención del Secretario General y que había celebrado con él conversaciones acerca de la aplicación de la resolución del Comité Especial. Dichas conversaciones proseguían.

428. El representante del Secretario General, en respuesta a la declaración del representante del Irak, informó al Comité Especial que el Secretario General continuaba sus consultas en relación con la petición que se le hacía en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución sobre la cuestión de Adén, aprobada por el Comité Especial el 15 de junio de 1966.

429. Al hacerlo, el Secretario General había tomado plenamente en cuenta las opiniones expresadas por el Presidente del Subcomité de Adén, en nombre de dicho Subcomité, y por los miembros del Comité Especial en su 462a. sesión, respecto de la carta del 1º de agosto de 1966 del Gobierno del Reino Unido (véase anexo V), y, en particular, de las reservas formuladas en dicha carta. El Secretario General había celebrado varias consultas al respecto con todos los interesados, particularmente con el Presidente del Comité Especial y el representante de la Potencia Administradora.

430. El Secretario General informaría lo antes posible sobre el resultado de sus consultas.

ANEXO I

[A/AC.109/161]

Cuestión de Adén

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (16 de mayo de 1966)

Introducción

1. La Asamblea General, en su resolución 2023 (XX) relativa a la cuestión de Adén, que aprobó el 5 de noviembre de 1965, pide al Secretario General "que adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la aplicación de la presente resolución e informe al Comité Especial sobre el particular".

2. El Secretario General, por carta de fecha 10 de noviembre de 1965, transmitió el texto de la resolución al Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas. Se transmitió además el texto de esa resolución a los organismos especializados y a las organizaciones internacionales de socorro siguientes: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y Comité Internacional de la Cruz Roja.

3. El presente informe contiene una breve exposición de las consultas que el Secretario General celebró con el Reino Unido, así como de las respuestas recibidas de los gobiernos, organismos especializados y organizaciones internacionales de socorro.

I. Consultas con el Reino Unido

4. Atendiendo a una solicitud formulada en el Comité Especial, el representante del Secretario General informó al Comité, en su 401a. sesión, celebrada el 6 de abril de 1966, que el Secretario General había estado en comunicación con el Representante del Reino Unido con respecto a la aplicación de la resolución. Declaró que el Secretario General efectuaría consultas con el Representante del Reino Unido acerca de los distintos asuntos aludidos en la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General y que informaría al Comité Especial lo antes posible.

5. Desde esa fecha, el Secretario General ha celebrado otras conversaciones con el Representante del Reino Unido.

6. El 13 de mayo de 1966, el Representante Permanente y el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido pusieron en conocimiento del Secretario General que el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional había anunciado en esa fecha que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional y que tenía la intención de organizar lo antes posible una conferencia representativa de todos los Estados de Arabia Meridional, así como de grupos políticos y otras entidades, a fin de estudiar los medios que permitiesen dar aplicación a las resoluciones de las Naciones Unidas. A continuación se reproduce el texto completo de la declaración del Gobierno federal:

"El Gobierno federal ha estado considerando, a la luz de los últimos acontecimientos, qué nuevas medidas se han de adoptar en aplicación de su política para realizar la unificación y la independencia de Arabia Meridional. Como es sabido, el Gobierno federal, en forma repetida y sistemática, ha insistido pública y privadamente en la unificación de nuestra amada patria. La fundación de la Federación y la adhesión a ella de otros Estados, cuyo número asciende ahora a 17, constituyeron medidas vitales y prácticas para reunir la totalidad de Arabia Meridional bajo un gobierno central fuerte. En la Conferencia de 1964, el Gobierno federal recibió la promesa de que se concedería la independencia a Arabia Meridional a más tardar en 1968, y se cursó entonces una invitación a los Estados que permanecían fuera de la Federación para que se uniesen a nosotros. En la Conferencia de 1965, el Gobierno federal declaró que consideraba de suma importancia que todos los Estados de Arabia Meridional participaran en todas las futuras discusiones de asuntos consti-

tucionales, y suscribió los principios de la libre determinación y de la independencia que inspiran las resoluciones de las Naciones Unidas. En época más reciente, ha habido cierto número de hechos nuevos. El Gobierno federal eliminó los obstáculos jurídicos que se oponían al regreso de los exiliados políticos de Arabia Meridional y ha mantenido útiles discusiones extraoficiales en Beirut, y en otras partes, con representantes de la Liga de Arabia Meridional y otras personalidades políticas. El Gobierno federal, asimismo, nombró asesores constitucionales para estudiar los problemas prácticos que supone una Constitución para toda Arabia Meridional, y el informe de esos asesores se ha puesto a disposición del público. A la luz de todos esos acontecimientos y atendiendo a los deseos de la población de Arabia Meridional, el Gobierno federal ha decidido aceptar la resolución de las Naciones Unidas relativa a Arabia Meridional. En consecuencia, el Gobierno federal ha decidido organizar lo antes posible una conferencia en la cual se encuentren representados todos los Estados de la Federación de Arabia Meridional, los Estados Qu'aiti, Kathiri, Mahr y Alto Yafa'i, los grupos políticos y otras entidades que se preocupan por su patria, a fin de que estudien los medios que permitan dar aplicación a las resoluciones de las Naciones Unidas y crear una atmósfera propicia a la introducción de reformas constitucionales que unifiquen a Arabia Meridional, preparándola para el momento en que ocupará el lugar que le corresponde como Estado árabe soberano e independiente."

7. El 16 de mayo de 1966, el Representante Permanente del Reino Unido participó además al Secretario General que el Gobierno del Reino Unido había acogido con agrado la decisión del Gobierno federal de invitar a los Estados, grupos políticos y otras entidades a celebrar consultas conjuntas con respecto a su futuro. Igualmente informó al Secretario General que, en una declaración formulada el 16 de mayo en la Cámara de los Comunes, en Londres, el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido había indicado que el Gobierno del Reino Unido recibía con beneplácito la decisión del Gobierno federal relativa a las resoluciones de las Naciones Unidas y se había referido a la intención del Gobierno federal de transmitir al Secretario General de las Naciones Unidas, por conducto del Gobierno del Reino Unido, una solicitud para que se nombrase un observador de las Naciones Unidas ante la Conferencia que se proyectaba convocar con miras a llegar a un acuerdo para formular un programa en virtud del cual pudieran aplicarse las resoluciones de las Naciones Unidas.

8. El Secretario General tiene entendido que cabe esperar que la solicitud del Gobierno federal llegará próximamente.

II. Respuestas de Gobiernos

REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA

[En el documento A/6317 se reproduce la respuesta enviada con fecha 27 de diciembre de 1965 por la Misión Permanente de la República Socialista Soviética de Bielorrusia ante las Naciones Unidas.]

INDIA

[*Texto original en inglés*
[7 de enero de 1966]]

El Gobierno de la India ha tomado nota de la resolución 2023 (XX), de 5 de noviembre de 1965, relativa a la cuestión de Adén, resolución que había sido copatrocinada por la delegación de la India en la Cuarta Comisión.

REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA

[En el documento A/6276 se reproduce la respuesta enviada con fecha 2 de mayo de 1966 por el Representante Permanente de la República Socialista Soviética de Ucrania ante las Naciones Unidas.]

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

[En el documento A/6179 se reproduce la respuesta enviada con fecha 14 de diciembre de 1965 por el Representante Per-

manente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante las Naciones Unidas.]

III. Respuestas de organismos especializados y de organizaciones internacionales de socorro

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

[*Texto original en inglés*
[23 de noviembre de 1965]]

Tengo el honor de participarle que se ha tomado debida nota de la solicitud dirigida en dicha resolución a los organismos especializados, que se ha servido señalar a nuestra atención.

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

[*Texto original en inglés*
[2 de diciembre de 1965]]

Hemos tomado debida nota de la resolución 2023 (XX), que la Asamblea General aprobó en su 1368a. sesión plenaria, el 5 de noviembre de 1965.

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

[*Texto original en inglés*
[7 de diciembre de 1965]]

Hemos tomado debida nota de la resolución de que se trata, en la cual se pide a las organizaciones internacionales de socorro que presten toda la ayuda posible a las personas que sufren las consecuencias de las operaciones militares en el Territorio de Adén.

ANEXO II

[A/AC.109/L.289]

Informe del Subcomité de Adén

Presidente: Sr. Danilo Lekić (Yugoslavia)

1. El Subcomité de Adén se estableció en virtud de una resolución aprobada por el Comité Especial el 9 de abril de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. VI, párr. 166). En dicha resolución se establecían las siguientes atribuciones para el Subcomité:

"a) Estudiar y seguir en todo momento de cerca la situación en el Territorio e informar al respecto al Comité Especial;

"b) Establecer contactos con la Potencia Administradora, en el momento y lugar que se convengan, para dar cumplimiento a las resoluciones 1514 (XV) y 1949 (XVIII);

"c) Disponer lo necesario, en consulta con la Potencia Administradora para efectuar visitas al Territorio;

"d) Efectuar las demás visitas que estime necesarias."

2. El Subcomité ha presentado ya tres informes al Comité Especial. El primero (*ibid.*, cap. VI, anexo) fue presentado en noviembre de 1964, el segundo (A/6000/Rev.1, cap. VI, apéndice I), en abril de 1965, y el tercero (*ibid.*, apéndice II) en septiembre de 1965.

3. A raíz de la presentación del último informe del Subcomité, el Comité Especial decidió, en su 386a. sesión celebrada el 16 de septiembre de 1965, tomar nota del informe del Subcomité, hacer suyas las conclusiones de dicho informe y remitirlo a la Asamblea General, junto con el informe ya preparado para 1965 sobre la cuestión de Adén (*ibid.*, cap. VI, secciones A a C). El Comité Especial decidió también que el Subcomité de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité Especial el 17 de mayo de 1965 (*ibid.*, cap. VI, párr. 300) siguiera de cerca en todo momento la cuestión de Adén e informase al Comité cuando procediere.

4. En la 401a. sesión del Comité Especial, celebrada el 6 de abril de 1966, el Presidente del Comité Especial anunció que Afganistán ocuparía la vacante creada en el Subcomité de Adén

al retirarse Camboya del Comité Especial. En consecuencia, el Subcomité de Adén está integrado por Afganistán, Costa de Marfil, Irak, Venezuela y Yugoslavia.

5. En 1966 el Subcomité ha celebrado cuatro sesiones, los días 10, 16, 17 y 18 de mayo.

6. En su primera sesión, celebrada el día 10 de mayo, el Subcomité eligió Presidente por unanimidad al Sr. Danilo Lekić (Yugoslavia).

7. Después de la reunión celebrada por el Subcomité el 16 de mayo, el Presidente presentó, en la misma fecha, un informe verbal al Comité Especial en su 414a. sesión. En el informe se decía:

"En su sesión del 16 de mayo de 1966, el Subcomité de Adén examinó la cuestión de la aplicación de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General. El Subcomité observó que entre las recomendaciones y peticiones de la Asamblea General se pide al Secretario General:

"...que adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la aplicación de la presente resolución e informe al Comité Especial sobre el particular."

"En la sesión de hoy del Subcomité de Adén comuniqué que había visto al Secretario General, quien me había informado que, como resultado de las consultas celebradas por él con el representante del Reino Unido, esperaba que esta tarde podría presentar un informe al Comité Especial. Como ya se ha mencionado, se han puesto a disposición del Comité Especial ejemplares en inglés de dicho informe. El Subcomité decidió pedir al Presidente del Comité Especial que se celebrara otra sesión del Comité Especial antes de partir para Africa, a fin de que pudiera seguir examinando el informe del Secretario General."

8. En la misma reunión el Comité Especial decidió celebrar otra sesión sobre la cuestión de Adén antes de salir para Africa, en el entendimiento de que, si el Subcomité lo consideraba necesario, presentaría otro informe al Comité Especial.

9. En su reunión celebrada el 17 de mayo de 1966 el Subcomité examinó el informe del Secretario General presentado en cumplimiento del párrafo 13 de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General (véase anexo I), la declaración hecha por el Representante Permanente del Reino Unido en la 414a. sesión del Comité Especial, celebrada el 16 de mayo, y la declaración hecha el 16 de mayo en la Cámara de los Comunes por el Secretario de Relaciones Exteriores a la que había aludido el Representante Permanente (véase anexo IV).

10. El Subcomité, al formular los comentarios siguientes sobre estas declaraciones, desea dejar en claro que las cuestiones que plantea sólo tienen carácter de observaciones preliminares y no debe considerarse que agotan el tema.

11. En primer lugar, el Subcomité desea señalar que al formular sus comentarios sobre estas declaraciones se ha basado en las resoluciones de la Asamblea General acerca de la cuestión de Adén, es decir, en la resolución 1949 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, en la 1972 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, y en la 2023 (XX) de 5 de noviembre de 1965, que se aprobaron teniendo en cuenta la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960.

12. El Subcomité señala que, en las declaraciones hechas en nombre del Gobierno del Reino Unido, se alude a la actitud del llamado Gobierno de la Federación de Arabia Meridional respecto de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Adén. El Subcomité desea llamar la atención sobre el hecho de que estas resoluciones y lo que en ellas se pide se dirigen al Gobierno del Reino Unido, que, en su calidad de Potencia Administradora, las Naciones Unidas consideran responsable de aplicar las resoluciones en el Territorio. Por lo tanto, lo que preocupa a las Naciones Unidas es la actitud del Gobierno del Reino Unido. El llamado Gobierno de la Federación que, como ya ha demostrado el Subcomité, no representa al pueblo de Arabia Meridional, no tiene nada que decir en este asunto.

13. Con respecto a la actitud del Gobierno del Reino Unido, el Subcomité no ha podido apreciar en las declaraciones hechas por el Representante Permanente ni por el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores una aceptación clara de las resoluciones de las Naciones Unidas. Estas declaraciones indican que sólo se aceptan con reservas cuestiones tan importantes como la de poner fin al estado de excepción y la de poner en libertad a los presos políticos, que figuran entre las medidas que han pedido las Naciones Unidas. Además, no indican que el Gobierno del Reino Unido haya convenido en adoptar las medidas que se esbozan en las resoluciones de las Naciones Unidas, ni en hacerlo conforme al orden que se sugiere en ellas. Esas medidas, así como el orden en que se debían aplicar, se esbozaban claramente en el informe del Subcomité de Adén presentado al Comité Especial en septiembre de 1965, en el que se decía lo siguiente:

"78. El Subcomité está convencido de que el objetivo inmediato de la Potencia Administradora debe ser la celebración de elecciones generales en todo el Territorio, y de que debe encaminar todos sus esfuerzos a organizarlas sin demora. Las medidas inmediatas deben ser las indicadas en la resolución 1949 (XVIII) de la Asamblea General y en las resoluciones del Comité Especial, a saber, la celebración de una conferencia con el fin de decidir acerca de las medidas constitucionales necesarias para la realización de tales elecciones, y la creación de un clima adecuado para efectuar las elecciones mediante la abolición del estado de emergencia, la derogación de todas las leyes que restringen las libertades públicas, el cese de todas las medidas represivas contra el pueblo del Territorio, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Al mismo tiempo, deben tomarse las medidas propuestas en la resolución 1949 (XVIII) a fin de asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas antes y en el curso de estas elecciones. Una vez celebradas las elecciones y formado un gobierno representativo, deben iniciarse sin demora conversaciones con ese gobierno con el objeto de fijar la fecha para la concesión de la independencia y disponer lo necesario para el traspaso de poderes." (A/6000/Rev.1, cap. VI, apéndice II.)

14. El Comité desea destacar la importancia de la presencia efectiva de las Naciones Unidas en el Territorio una vez se hayan adoptado esas medidas. Recuerda también que la Asamblea General, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 1949 (XVIII), había pedido al Secretario General que, "en consulta con el Comité Especial y la Potencia Administradora", adoptara las medidas necesarias para asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas.

15. El Subcomité está convencido de que la Potencia Administradora debería haber convocado la conferencia que se menciona en las declaraciones, conforme a las condiciones que se formulan en las resoluciones 1514 (XV), 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General.

16. En cuanto a los aspectos generales de la aplicación de la resolución 2023 (XX), el Subcomité observa con preocupación que del informe del Secretario General (véase anexo I) se deduce que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los organismos especializados y las organizaciones internacionales de socorro no han respondido a la solicitud de la Asamblea General de que presten toda la ayuda posible a las personas que sufren las consecuencias de las operaciones militares en el Territorio.

17. Aunque el Subcomité se da perfecta cuenta de que el Comité Especial estudiará a fondo la cuestión de Adén durante sus reuniones en suelo africano, en El Cairo, recomienda que, como actos preliminares relacionados con la cuestión de Adén, el Comité Especial:

i) Insista en que es el Gobierno del Reino Unido, como Potencia Administradora, a quien las Naciones Unidas consideran autoridad responsable para aplicar las resoluciones de la Organización en el Territorio;

ii) Insté al Gobierno del Reino Unido a que tome inmediatamente las medidas descritas en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre este Territorio, con objeto de que el pueblo

del Territorio pueda lograr la independencia de acuerdo con sus deseos libremente expresados y sin más demoras;

iii) Insté además al Gobierno del Reino Unido a que haga todo lo posible para que el Subcomité pueda visitar el Territorio, de acuerdo con su mandato;

iv) Expresa su aprecio al Secretario General y le pida que continúe tomando las disposiciones que considere oportunas para asegurar la aplicación de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, teniendo presente especialmente la solicitud de que adopte las medidas necesarias para asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas, tal como se expresa en el párrafo 9 de la resolución 1949 (XVIII);

v) Pida al Secretario General que solicite información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales de socorro acerca de las disposiciones que piensan adoptar para atender la solicitud que se les hace en el párrafo 12 de la resolución 2023 (XX);

vi) Pida además al Secretario General que informe al Comité Especial durante su actual período de sesiones sobre las cuestiones a que se refieren los incisos iv) y v) *supra*.

ANEXO III

[A/AC.109/161/Add.1/Rev.1]

Cuestión de Adén

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (9 de junio de 1966)

1. En su último informe al Comité Especial (véase anexo I), de 16 de mayo de 1966, el Secretario General manifestó que el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte le había informado que el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional pensaba pedir al Secretario General que nombrase un observador de las Naciones Unidas ante la conferencia que tenía la intención de convocar. El Secretario General manifestaba asimismo que, según tenía entendido, la petición del Gobierno federal le llegaría en breve plazo.

2. En carta de 25 de mayo de 1966, el Representante Permanente del Reino Unido transmitía otra, de 15 de mayo, dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Federación de Arabia Meridional al Secretario General.

3. La carta del Representante Permanente del Reino Unido dice lo siguiente:

"Tengo el honor de transmitirle una carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Arabia Meridional a Vuestra Excelencia, a la que acompaña la declaración del Gobierno federal de 13 de mayo y en la que se pide a Vuestra Excelencia que designe un observador para la Conferencia que se celebrará el 1º de agosto para estudiar las formas y procedimientos de poder aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional.

"El Gobierno del Reino Unido apoya dicha solicitud y confía en que Vuestra Excelencia considerará posible acceder a ella."

4. La carta del Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Federación dice lo siguiente:

"Vuestra Excelencia habrá tenido noticia de la declaración hecha el 13 de mayo de 1966 por mi Gobierno en la que anunciaba su aceptación de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional y su decisión de organizar lo antes posible una conferencia representativa de todos los Estados y grupos políticos de Arabia Meridional para estudiar las formas y procedimientos de poder aplicar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Se acompaña una copia de dicha declaración".

"En estos momentos se están cursando invitaciones para asistir a la Conferencia en la capital federal, Al Ittihad, que comenzará el lunes 1º de agosto de 1966. Mi Gobierno, plenamente consciente de la grave responsabilidad que le incumbe ante el pueblo de Arabia Meridional en cuanto a tomar

* Véase anexo I, párr. 6.

todas las medidas posibles para garantizar el éxito de dicha Conferencia, me ha ordenado ponerme en contacto con Vuestra Excelencia y formularle el encarecido ruego de que se designe un observador de las Naciones Unidas para asistir a la misma. Dicho observador, que estimamos debiera ser árabe, nos ayudaría en nuestros debates e informaría a Vuestra Excelencia de los resultados.

"Mi Gobierno confía plenamente en que Vuestra Excelencia considerará posible acceder a la petición de que se nombre un observador, cuya presencia en la próxima Conferencia no sólo contribuirá a asegurar el éxito de la misma, sino que asociará a las Naciones Unidas a la elaboración de propuestas detalladas para aplicar sus propias resoluciones que probablemente tendrán efectos trascendentales sobre el futuro de la población de Arabia Meridional."

5. Se recordará que la Asamblea General, en el párrafo 9 de su resolución 1949 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, pide al Secretario General que "en consulta con el Comité Especial y la Potencia Administradora, adopte las medidas necesarias para asegurar la presencia efectiva de las Naciones Unidas antes y durante las elecciones a que se alude en el párrafo 8 *supra*". Además, la Asamblea General, en el párrafo 13 de su resolución 2023 (XX) de 5 de noviembre de 1965, pide al Secretario General que "adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la aplicación de la presente resolución e informe al Comité Especial sobre el particular". El Secretario General ha celebrado conversaciones con el Subcomité de Adén del Comité Especial y con el Representante Permanente del Reino Unido acerca de la realización de dichas tareas.

6. El Secretario General ha decidido nombrar al Sr. Omar A. H. Adeel como su Representante Especial para la cuestión de Adén a fin de que le ayude a desempeñar el cometido que le confiaron las resoluciones antes citadas. El Representante Especial del Secretario General asistirá a las sesiones del Comité Especial durante el examen que éste realizará próximamente de la cuestión de Adén.

7. Cuando el Comité Especial haya examinado la cuestión, y teniendo en cuenta el informe de su Representante Especial, el Secretario General examinará, en consulta con el Subcomité de Adén, el Comité Especial y la Potencia Administradora, las demás medidas que se han de adoptar para dar cumplimiento a las tareas que se le han asignado.

ANEXO IV

[A/AC.109/163]

Carta del 17 de mayo de 1966 dirigida al Presidente del Comité Especial por el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas

En cumplimiento del compromiso que asumí en la 414a. sesión del Comité Especial, celebrada el 16 de mayo de 1966, tengo el honor de transmitir el texto de la declaración que sobre Arabia Meridional hizo el mismo día en la Cámara de los Comunes el muy Honorable Michael Stewart, M. P., Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido.

El texto completo de la declaración hecha por el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional el 13 de mayo, a la que se refirió el Secretario de Relaciones Exteriores, figura en el párrafo 6 del informe del Secretario General al Comité Especial que fue distribuido como documento A/AC.109/161*.

Mucho agradeceré a V. E. se sirva disponer que el texto de esta carta y el que se acompaña sean distribuidos como documento del Comité Especial.

(Firmado) CARADON

TEXTO DE LA DECLARACIÓN HECHA EL 16 DE MAYO DE 1966 EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES POR EL MUY HONORABLE MICHAEL STEWART, M. P., SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS RELACIONES EXTERIORES DEL REINO UNIDO RESPECTO DE LA FEDERACIÓN DE ARABIA MERIDIONAL

Con la venia del señor Presidente y de la Cámara me permitiré hacer una declaración sobre Arabia Meridional.

* Véase anexo I.

Los honorables miembros tendrán noticia de la declaración que ha hecho el 13 de mayo el Gobierno de la Federación de Arabia Meridional en el sentido de que ha decidido aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Arabia Meridional y se propone convocar una conferencia, abierta a todos los gobiernos de los Estados y los grupos políticos de Arabia Meridional, a fin de que estudien los medios que permitan dar aplicación a las resoluciones de las Naciones Unidas. Acabo de recibir el texto completo de la declaración del Gobierno federal y he encargado que se coloque una copia de ella en la biblioteca de la Cámara.

El Gobierno de Su Majestad ha indicado siempre claramente que aceptará cualquier solución del problema constitucional de Arabia Meridional que permita lograr un acuerdo amplio en el Territorio. En consecuencia, acogemos muy complacidos la intención del Gobierno federal de celebrar una conferencia representativa y compartimos su esperanza de que se encuentren en condiciones de participar en ella todos los árabes meridionales que se preocupan sinceramente por los intereses de su país.

Otros grupos políticos de Arabia Meridional han pedido igualmente la aceptación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, existe ahora entre ellos y el Gobierno federal una amplia zona de acuerdo respecto de sus objetivos futuros. Ello debería permitirles cooperar a los efectos de solucionar las consecuencias prácticas de sus posiciones políticas.

Ciertas recomendaciones contenidas en las resoluciones de las Naciones Unidas plantean problemas de oportunidad que reclaman una cuidadosa atención. Los que se refieren a la base de Adén ya han sido atendidos al anunciar el Gobierno de Su Majestad, en el Libro Blanco sobre Defensa, que las tropas británicas serán retiradas de la base una vez que Arabia Meridional obtenga su independencia, a más tardar en 1968. Hay otras, como la de que se ponga fin al estado de excepción y de que se libere a todos los detenidos políticos, que estaríamos dispuestos a cumplir a condición de que se presentaran pruebas satisfactorias de que ha terminado el terrorismo en Adén.

Hoy he sabido que el Gobierno federal ha entregado al Alto Comisionado, para que la transmita al Secretario General de las Naciones Unidas, una carta en la que le invita a designar un observador de las Naciones Unidas para que asista a la proyectada Conferencia. He solicitado a mi distinguido amigo, Lord Caradon, que participe a las Naciones Unidas el anuncio y la invitación del Gobierno federal y que en la primera oportunidad trate con el Secretario General estos acontecimientos que acogemos con satisfacción de modo general.

ANEXO V

[A/AC.109/161/Add.2]

Cuestión de Adén

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (5 de agosto de 1966)

1. En su último informe al Comité Especial sobre la cuestión de Adén (véase anexo III), presentado en cumplimiento del párrafo 13 de la parte dispositiva de la resolución 2023 (XX) de la Asamblea General de 5 de noviembre de 1965, el Secretario General comunicó al Comité que su Representante Especial para la cuestión de Adén, Sr. Omar A. H. Adeel, asistirá a las sesiones del Comité Especial en El Cairo durante el examen que dicho Comité realizaría de la cuestión de Adén. El Secretario General también señaló que, cuando el Comité Especial hubiese examinado la cuestión, y teniendo en cuenta el informe de su Representante Especial, examinaría, en consulta con el Subcomité de Adén, el Comité Especial y la Potencia Administradora, las demás medidas que se habrían de adoptar para dar cumplimiento a las tareas que se le habían asignado.

2. En su 447a. sesión, celebrada en El Cairo el 15 de junio de 1966, el Comité Especial aprobó una resolución sobre la cuestión de Adén (véase cap. VI, párr. 382). En el párrafo 12 de la parte dispositiva de esa resolución, el Comité Especial pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial

y con la Potencia Administradora, designara inmediatamente una misión especial para Adén con el fin de que recomendara las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, en especial, determinara el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, y le presentara a la mayor brevedad posible un informe para transmitirlo al Comité Especial.

3. El Secretario General, por carta de fecha 20 de junio de 1966, transmitió el texto de la resolución al Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Naciones Unidas.

4. Cuando el Comité Especial concluyó el examen de la cuestión en sus sesiones celebradas en El Cairo, el Representante Especial del Secretario General regresó inmediatamente a la Sede y presentó un informe al Secretario General. En dicho informe, el Representante Especial ponía al Secretario General en conocimiento de los debates del Comité Especial que habían conducido a la aprobación de su resolución.

5. A la luz del informe del Representante Especial y sobre la base de la resolución aprobada por el Comité Especial, el Secretario General, con la colaboración de su Representante Especial, inició consultas relacionadas con la designación de la misión especial. Durante tales consultas, el Secretario General se reunió — para analizar la cuestión — con el Presidente del Comité Especial y los miembros del Subcomité de Adén y con el representante del Reino Unido.

6. El 1° de agosto de 1966, el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido dirigió al Secretario General la siguiente carta*:

"El Gobierno de Su Majestad acoge con beneplácito la ayuda y participación de las Naciones Unidas en la tarea de lograr la realización de la política declarada del Gobierno de Su Majestad de llevar a Arabia Meridional a la independencia, como Estado unido y soberano, para 1968.

"El Gobierno de Su Majestad acepta los párrafos de la parte dispositiva de las resoluciones 1949 (XVIII), de diciembre de 1963, y 2023 (XX), de noviembre de 1965, de la Asamblea General, siempre que se reconozca, en primer lugar, que las responsabilidades del Gobierno de Su Majestad en materia de seguridad no pueden ser limitadas ni abandonadas, y en segundo lugar, que el Gobierno de Su Majestad se encuentra jurídicamente obligado por los tratados existentes con la Federación de Arabia Meridional y los Estados no federados de Arabia Meridional, hasta la terminación de dichos tratados. En particular, el Gobierno de Su Majestad no está constitucionalmente en condiciones de dar directivas al Gobierno federal, excepto en lo atinente a las relaciones exteriores, la

defensa y la administración pública, y carece de facultades para imponer cambios en la Constitución Federal.

"El Gobierno de Su Majestad se complacerá en cooperar, previo acuerdo respecto de su composición, con una misión designada por el Secretario General, con el fin de que recomiende las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las citadas resoluciones de la Asamblea General y, en especial, determine el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones con la única salvedad de las dos reservas mencionadas en el párrafo precedente.

"Agradeceré a Ud. que me confirme que cualquier misión designada cumplirá sus funciones sobre la base antedicha."

7. La respuesta del Secretario General^a, de fecha 5 de agosto de 1966, dice lo siguiente:

"Tengo el honor de referirme a su carta de 1° de agosto de 1966 relativa a la cuestión de Adén.

"Me satisface tomar nota de que su Gobierno acoge con beneplácito la ayuda y participación de las Naciones Unidas en la tarea de llevar a Arabia Meridional a la independencia, como Estado unido y soberano, y que, con las reservas señaladas, acepta los párrafos de la parte dispositiva de las resoluciones 1949 (XVIII), de 11 de diciembre de 1963, y 2023 (XX), de 5 de noviembre de 1965, de la Asamblea General.

"Asimismo, tomo nota con satisfacción de que su Gobierno se complacerá en cooperar, previo acuerdo respecto de su composición, con una misión designada por el Secretario General, con el fin de que recomiende las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las citadas resoluciones de la Asamblea General y, en especial, determine el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, con la única salvedad de las reservas mencionadas en su carta.

"Como sabe Ud., a esta cuestión se refería el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité Especial en su 447a. sesión, celebrada el 15 de junio de 1966, en el que se pedía al Secretario General que designase una misión especial, a los efectos señalados en dicho párrafo, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia Administradora. En consecuencia, me encuentro en condiciones de informarle que la designación de la misión especial conforme a los términos de la resolución citada se efectuará en consulta con su Gobierno.

"Cuando emprenda las consultas necesarias con el Comité Especial en tal sentido, señalaré a la atención de éste las reservas formuladas por su Gobierno."

8. El Secretario General continúa sus consultas de conformidad con la resolución del Comité Especial y presentará nuevos informes, según sea necesario.

* Distribuida en el documento A/6374.

CAPÍTULO VII*

BASUTOLANDIA, BECHUANIA Y SWAZILANDIA

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y 1965 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. Tras examinar la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia en sus reuniones celebradas en 1964, el Comité Especial aprobó una resolución (A/5800/Rev.1¹, cap. VIII, párr. 365) en la que se formulaban recomendaciones sobre dichos territorios. Entre estas recomendaciones se pedía al Secretario General que, en consulta con la Potencia Administradora, emprendiese un estudio acerca de los medios y arbitrios para asegurar la independencia económica de esos territorios frente a la República de Sudáfrica, y que pre-

sentara un informe al Comité Especial y a la Asamblea General.

2. En cumplimiento de esta solicitud el Secretario General presentó un informe sobre estos territorios al Comité Especial y a la Asamblea General². Como anexo al informe del Secretario General se incluyó el de una misión de asistencia económica y técnica que visitó los territorios en mayo y junio de 1965. Esta misión, que se estableció previa consulta entre el Secretario General y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, estaba integrada por tres miembros: el Presidente, un miembro designado por el Secretario General y otro por el Gobierno del Reino Unido.

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.5.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte 1).

² Ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5958.

3. El Comité Especial volvió a examinar la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia en sus reuniones de 1965. A la terminación de los debates el Comité Especial aprobó dos resoluciones (A/6000/Rev.1³, cap. VII, párrs. 292 y 364) sobre esta cuestión.

4. Por recomendación de la Cuarta Comisión, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2063 (XX), cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

"[La Asamblea General]

"1. Aprueba los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales relativos a los Territorios de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia y hace suyas sus conclusiones y recomendaciones;

"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia a la libertad y a la independencia;

"3. Invita una vez más a la Potencia Administradora a que tome urgentemente medidas para aplicar plenamente las resoluciones 1514 (XV), 1817 (XVII) y 1954 (XVIII) de la Asamblea General, conforme a los deseos libremente expresados por los pueblos de los tres Territorios;

"4. Pide una vez más a la Potencia Administradora que adopte inmediatamente medidas para restituir a los habitantes autóctonos todas las tierras que les han sido arrebatadas, sea cual fuere la forma o el pretexto de esta enajenación;

"5. Pide al Comité Especial que, en colaboración con el Secretario General, estudie las medidas necesarias para asegurar la integridad y la soberanía territorial de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia y presente un informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones;

"6. Expresa su satisfacción al Secretario General por sus esfuerzos y hace suyas las recomendaciones que figuran en su informe;

"7. Decide crear un Fondo para el desarrollo de la economía de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, el cual sería financiado mediante contribuciones voluntarias y quedaría confiado a la administración del Secretario General, en estrecha consulta con los gobiernos de estos tres Territorios, y con la cooperación y asistencia del Fondo Especial, de la Junta de Asistencia Técnica, de la Comisión Económica para Africa y de los organismos especializados interesados;

"8. Estima que deberían continuar los esfuerzos emprendidos en virtud de los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas y los de los organismos especializados, para proporcionar ayuda económica, financiera y técnica, a fin de poner remedio a la deplorable situación económica y social de estos tres Territorios;

"9. Pide al Secretario General que nombre representantes residentes en los tres Territorios, como lo ha recomendado en el párrafo 22 de su informe, y presente a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, un informe sobre el es-

tado del Fondo creado en virtud del párrafo 7 supra."

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS⁴

5. La información sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia figura en los informes presentados por el Comité Especial a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimoséptimo, decimooctavo, decimonoveno y vigésimo⁵, y en los informes presentados por el Secretario General al Comité Especial en 1964 (A/AC.109/98), y 1965^{6a}. A continuación se proporcionan datos suplementarios sobre la evolución política reciente de estos Territorios y su situación en materia económica, social y educativa.

1. PROBLEMAS COMUNES A LOS TRES TERRITORIOS

Evolución política

6. En el informe presentado por el Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. VII, párr. 5) se da una indicación sobre la política de Sudáfrica respecto de las futuras relaciones con los Territorios. Según informes, el 5 de junio de 1965, tras tomar nota de las recientes declaraciones de los tres Gobiernos sobre el porvenir de los Territorios respectivos, el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Hillgard Muller, dijo que su Gobierno celebraba que se aproximara la fecha de la independencia de estos Territorios y seguiría cooperando con ellos en las esferas económica y técnica, sin injerirse en sus asuntos internos ni en su sistema político.

7. En un comunicado que se dio al terminar la reunión de Primeros Ministros del Commonwealth celebrada en Londres del 17 al 25 de junio de 1965, se expresaba satisfacción ante las garantías dadas por el Primer Ministro del Reino Unido, de que uno de los objetivos de su Gobierno seguía siendo el de conducir a la independencia, a base del gobierno democrático y del principio del sufragio universal de los adultos, a las dependencias británicas que la desearan y que estuvieran en condiciones de mantenerse independientes. En el comunicado también se hacía constar la opinión expresada durante dicha reunión, de que se proporcionaría la asistencia económica y las garantías de integridad territorial que fueran necesarias para mantener a los territorios de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia como Estados independientes.

8. En una reunión conjunta de la Royal African Society y de la Royal Commonwealth Society, cele-

⁴ Esta sección se basa en la información reunida por la Secretaría en diversas fuentes. También se ha tenido en cuenta la información transmitida por el Reino Unido en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta (con respecto al año terminado el 31 de diciembre de 1964), con fecha 1° de junio de 1965 para Bechuania, con fecha 1° de octubre de 1965 para Swazilandia y con fecha 5 de noviembre de 1965 para Basutolandia.

⁵ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del programa, documento A/5238, cap. V; *ibid.*, decimooctavo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1, cap. IX; *ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I), documento A/5800/Rev.1, cap. VIII; e *ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/6000/Rev.1, cap. VII.

^{6a} *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5958.

³ *Ibid.*, Anexos, adición al tema 23 del programa.

brada en Londres el 1° de julio de 1965, la Sra. Eirene White, Subsecretaria parlamentaria en el Ministerio de Colonias, dijo que la evolución constitucional de dichos Territorios avanzaba con cierta rapidez. Pero añadió que ninguno de ellos era económicamente independiente ni era probable que lo fuese durante algún tiempo. Para sus servicios profesionales y técnicos, en la actualidad, los tres dependían en gran medida de funcionarios públicos procedentes de la República de Sudáfrica. Por lo tanto, la Sra. White se preguntaba si la independencia política, combinada con la dependencia económica y administrativa, no produciría "un serio dolor de cabeza" en lo futuro.

9. La Sra. White observó que, políticamente, iba quedando muy poco tiempo. Esto significaba que tanto para el Reino Unido y la población de los tres Territorios, como para los demás pueblos bien dispuestos del mundo, era cuestión de tratar de ayudar a remediar algunas de las deficiencias que harían extraordinariamente difícil el porvenir político de los Territorios e impondrían una carga inmensa a sus dirigentes políticos.

10. Refiriéndose a la situación de los tres Territorios con respecto de Sudáfrica, la Sra. White manifestó que este hecho debía reconocerse como una realidad y que el pueblo de los Territorios tenía que elaborar por su propia cuenta algún sistema de coexistencia.

11. La Sra. White agregó que la filosofía de los bantustanes no resultaba atractiva para su Gobierno ni para los Gobiernos de los Territorios. El Gobierno del Reino Unido seguiría muy atentamente la evolución en cuanto a las relaciones que habían de establecerse. Manifestó que correspondía a su Gobierno velar porque en el período que quedaba hasta la independencia, y también después de la independencia, la población de los territorios tuviera una buena oportunidad de labrar su propio porvenir.

12. Según informes, el Sr. Verwoerd, en un discurso que pronunció ante una reunión del National Party que se celebró en Upington, Sudáfrica, el 30 de septiembre de 1965, dijo que los tres Territorios revestían gran importancia para Sudáfrica, dada su proximidad. La paz, la prosperidad y el progreso en esos Territorios era algo que interesaba mucho a Sudáfrica, y la República estaba dispuesta a cooperar para el logro de esos objetivos.

13. Durante el segundo período de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA), celebrado en Accra, Ghana, del 21 al 25 de octubre de 1965, se debatió la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. En esa reunión se aprobó una resolución (véase apéndice III, anexo, resolución AHG/Res.36) en la que la Asamblea manifestó que deseaba impedir que Sudáfrica absorbiera esos Territorios, y puso de relieve una vez más la importancia de conseguir que se aplicara la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y de que las Naciones Unidas garantizaran la integridad territorial, la independencia y la soberanía de esos Territorios.

14. Se han tenido noticias de que el 7 de febrero de 1966 el Viceministro sudafricano de Administración y Desarrollo Bantú, Sr. M. C. Botha, confirmó en la Asamblea de Sudáfrica que su Gobierno consideraba la posibilidad de llegar a acuerdos territoriales con los

tres Territorios. El Sr. Botha manifestó que su Gobierno no estaría dispuesto a ayudar a esos tres Territorios a recuperar, por compra o intercambio, tierras que actualmente estaban ocupadas por europeos, pero que ello dependía de que Sudáfrica pudiera desempeñar cierto papel en la orientación del futuro desarrollo político y económico de dichos Territorios.

Situación económica

15. Como ya se ha manifestado en el párrafo 2 *supra*, una misión de asistencia económica y técnica visitó los Territorios durante mayo y junio de 1965, y posteriormente se presentó su informe al Comité Especial y a la Asamblea General.

16. Con el consentimiento de los Gobiernos de los tres Territorios, otra misión económica procedente del Ministerio de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido visitó Basutolandia, Bechuania y Swazilandia entre octubre y diciembre de 1965. Las atribuciones de esa misión eran:

"Examinar, en consulta con los Gobiernos de Basutolandia, del Protectorado de Bechuania y de Swazilandia, las medidas necesarias para desarrollar la economía de esos Territorios y reducir su dependencia de la ayuda externa en la financiación de sus gastos corrientes, y para calcular el volumen y los plazos de la asistencia externa requerida para conseguir estos fines."

Todavía no se dispone del informe de dicha misión.

17. Conforme a la información suministrada por la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, los proyectos en beneficio de los tres territorios aprobados con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica registran un aumento considerable entre 1963-1964 y 1965-1966, o sea de 437.874 a 848.948 dólares (incluso créditos para casos urgentes por valor de 52.900 dólares, autorizados desde el 1° de enero de 1965). Los proyectos actuales siguen abarcando una gran variedad de actividades de desarrollo.

18. Se ha creado en Gaberones (Bechuania) una oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que servirá a los tres Territorios. Esta oficina está dirigida por un representante residente adjunto, que es directamente responsable ante el representante para el Africa Central y meridional.

Situación educativa

19. En el discurso que pronunció en julio de 1965 (véanse los párrs. 8 a 11 *supra*), la Sra. Eirene White expresó su preocupación por la insuficiencia de los recursos que en los Territorios se destinaban a la educación. Dijo que no se podía negar que los servicios de enseñanza en cada uno de los Territorios distaban mucho de ser adecuados. Resultaba difícil ver cómo podrían remediarse esas deficiencias en breve plazo.

Universidad de Basutolandia, Protectorado de Bechuania y Swazilandia

20. En marzo de 1965, la Universidad de Basutolandia, Protectorado de Bechuania y Swazilandia (UBBS), creó ocho "escuelas de estudio" como sustitutos de las facultades corrientes. Entre las asignaturas que enseñan dichas escuelas figuran los estudios

africanos, ciencias biológicas y de la tierra, economía y administración, pedagogía, historia, idiomas y literatura, derecho, matemáticas y física. Como parte de su programa de expansión, la Universidad creó nuevas cátedras de pedagogía, química, física, derecho y administración.

21. Poco después de creada, la Escuela de Pedagogía adoptó una importante medida para atraer estudiantes a la profesión docente. En lugar de tener que pasar un año más en la Universidad para estudiar pedagogía, los estudiantes pueden proseguir sus estudios sobre este tema durante su curso de cuatro años al cabo de los cuales se les concede un título de "bachelor". También se organizan cursos para maestros en ejercicio, a los que actualmente se les permite matricularse como estudiantes con horario parcial para obtener un certificado en pedagogía, con lo cual pueden hacer sus estudios sin interrumpir su labor docente.

22. En julio de 1965 la Carnegie Corporation de Nueva York anunció que haría una donación de 34.000 libras esterlinas a la Escuela de Pedagogía, a fin de impulsar su programa de formación de maestros en los tres Territorios.

23. En octubre de 1965 los Trusts Dulverton y Le-verhulme del Reino Unido hicieron una donación de 43.000 libras al Departamento de Extensión de la UBBS para financiar su programa de desarrollo durante el trienio de 1965-1968.

24. Al terminar una reunión del Consejo de la UBBS celebrada en Swazilandia en octubre de 1965, se reveló que se había constituido un Comité de donaciones universitarias para que se ocupara en las donaciones hechas por distintos Gobiernos y fundaciones. La Universidad había obtenido cierto apoyo de fundaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido, pero necesitaría mucho más apoyo, tanto de fuentes gubernamentales como privadas, a fin de llevar a cabo su programa de gastos de capital, por valor de 1.500.000 libras, para el período de 1966-1970.

25. También se reveló que en breve plazo se inauguraría el Colegio Superior de Agricultura en Swazilandia. La Universidad había convenido en establecer un vínculo orgánico con el Colegio, a fin de que pudiera crearse en 1967 un curso de un año para recibir un diploma en agricultura, que daría a la Universidad. Los candidatos con certificado de estudios de los tres Territorios podrían aspirar a seguir este curso y obtener el diploma. Además, se debatieron los planes de la Universidad para aumentar su contribución a la formación de maestros, la formación para las profesiones forenses y de funcionarios gubernamentales, las instituciones cooperativas y la enseñanza en general en los tres Territorios.

26. En enero de 1966 la Universidad decidió iniciar un programa urgente de construcciones con objeto de elevar la matrícula a 300 estudiantes en 1967. El proyecto, por un costo de 150.000 libras esterlinas, sería financiado por el Ministerio de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido y el Consejo Interuniversitario de enseñanza superior en Ultramar.

27. En marzo de 1966 se informó que si se lograba el objetivo de este proyecto, era probable que la Universidad tuviera un déficit financiero de unas 600.000 libras esterlinas en 1967. El Gobierno del Reino Unido y otras fuentes ya habían aprobado la concesión de ayuda financiera a la Universidad.

2. BASUTOLANDIA

Evolución política y constitucional

Elecciones parciales del 1° de julio de 1965

28. El Jefe Leabua Jonathan, jefe del partido gubernamental Basutoland National Party (BNP), que había sido derrotado en las elecciones generales del 29 de abril de 1965, ganó una elección parcial en Mpharane el 1° de julio de 1965. El miembro que ocupaba el puesto, Sr. John Mulupe Mothepa, renunció para brindar al Jefe Jonathan la oportunidad de dirigir su propio partido en la Asamblea Nacional. El Jefe Jonathan obtuvo 2.873 votos y el Sr. Philip Lebona, del Basutoland Congress Party (BCP), 1.055 votos.

29. El Jefe Jonathan prestó juramento, el 5 de julio, como Primer Ministro. Inmediatamente después, el Jefe Sekhonyana Maseribane, que había dimitido el cargo de Primer Ministro, fue designado Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores.

Relaciones con Sudáfrica

30. El 4 de mayo de 1965, inmediatamente después de celebradas las elecciones generales, el Jefe Leabua Jonathan declaró que, al propio tiempo que rechazaba categóricamente toda idea de incorporación de Basutolandia a Sudáfrica y condenaba el apartheid, Basutolandia desearía establecer relaciones diplomáticas con la República de Sudáfrica y entrar en negociaciones con ella para obtener toda clase de beneficios materiales para los basutos.

31. El día siguiente se informó que el Gobierno sudafricano había mostrado su satisfacción por la victoria obtenida en las elecciones de Basutolandia por el partido del Jefe Jonathan y que esperaba empezar a preparar el terreno para futuras relaciones con este Territorio. En vista de la escasa mayoría del Jefe Jonathan, se afirmó que el Gobierno sudafricano había estimado importante apuntalar su autoridad mediante ayuda económica.

32. La política del Gobierno de Basutolandia de cooperación y relaciones amistosas con Sudáfrica constituyó el principal asunto debatido durante el primer período de sesiones de la nueva Asamblea Nacional que se reunió el 19 de mayo de 1965. Según se informa, dicha política fue enérgicamente impugnada por el BCP. El Jefe Sekhonyana Maseribane, a la sazón Primer Ministro, dijo en la clausura del debate, que Basutolandia había cooperado siempre con Sudáfrica y que no había otros vecinos con quienes se pudieran tratar los asuntos de interés común.

33. El 20 de mayo de 1965, la Asamblea Nacional, tras rechazar una moción de censura presentada por el Sr. Ntsu Mukhehle, jefe del BCP y de la oposición, aprobó una moción de confianza a favor del Gobierno.

34. El 26 de mayo de 1965, el Jefe Maseribane afirmó que su Gobierno estaba dispuesto a celebrar conversaciones con Sudáfrica y el Reino Unido para el aprovechamiento de los ríos de las zonas montañosas de Basutolandia, principal patrimonio económico del Territorio. Manifestó estar interesado en la propuesta últimamente hecha por la Cámara de Comercio del Estado libre de Orange en el sentido de que el

Gobierno sudafricano procediese a celebrar consultas con Basutolandia sobre el plan hidroeléctrico de Ox-bow, el mayor proyecto aislado en vías de estudio en el Territorio, cuyo desarrollo dependería de la venta de energía eléctrica y de agua a la República de Sudáfrica.

35. El 9 de junio de 1965, el Sr. Verwoerd anunció que el Gobierno sudafricano iba a enviar 100.000 sacos de cereales (de 200 libras cada saco) valorados en 160.000 libras esterlinas aproximadamente, al Jefe Leabua Jonathan en respuesta a un llamamiento urgente de este último en petición de ayuda para aliviar el hambre en Basutolandia. Según informes, no se habían hecho contactos con el Reino Unido para socorrer la situación de hambre.

36. Al cabo de los tres meses y medio de haber hecho el Sr. Verwoerd dicho anuncio, la donación de cereales se convirtió en tema de controversia en Basutolandia. El partido de la oposición BCP acusó al Primer Ministro de haber tratado de ganar las elecciones parciales, celebradas el 1º de julio de 1965, con "malas artes" y expresó el temor de que pudiera utilizarse el donativo como un señuelo para "incorporar el Territorio a la República".

37. El 23 de julio de 1965, se informó que el Jefe Jonathan había declarado en la Asamblea Nacional que el donativo representaba un generoso gesto en momentos de dura sequía y que él, como jefe del BNP, había cedido las remesas de cereales al Gobierno para su distribución entre la gente necesitada y menesterosa, cualquiera que fuese su afiliación política.

38. La oposición presentó entonces una moción en la que se pedía que la Asamblea Nacional se desentendiera del donativo y que el Gobierno no se encargara de distribuir los cereales en modo alguno.

39. El debate quedó interrumpido cuando la Asamblea aplazó abruptamente sus sesiones el 28 de julio de 1965, tras haber destituido la Alta Corte de Basutolandia de sus puestos a dos miembros del BNP a raíz de la presentación por el BCP de peticiones en las que se denunciaban irregularidades en las últimas elecciones generales. La Alta Corte, con esta decisión, hizo que desapareciera la mayoría absoluta del BNP en la Asamblea.

40. El 18 de agosto de 1965, se informó que un portavoz del Gobierno había dicho que se esperaba dar pronto curso a la distribución del donativo de los cereales de Sudáfrica.

41. Según informes, el Jefe Jonathan emitió un comunicado político el 27 de agosto de 1965, en el que anunciaba que estaba tratando oficialmente de entrar pronto en conversaciones con el Sr. Verwoerd sobre cuestiones tales como el plan hidroeléctrico de Ox-bow y el mejoramiento de las condiciones de los basutos empleados en Sudáfrica. Reiteró que su Gobierno deseaba vivir en buenas relaciones de vecindad con otros Estados, incluida Sudáfrica, a cuyo porvenir económico estaba necesariamente ligado el de Basutolandia.

42. Diez basutos, miembros todos ellos del BCP, quedaron inmovilizados en Londres en agosto de 1965 por haberse negado el Gobierno sudafricano a concederles visados de tránsito para regresar a Basutolandia. Un comunicado del Ministro de Relaciones Exteriores

de Sudáfrica alegaba que tales individuos habían salido de Basutolandia para recibir adiestramiento como saboteadores y guerrilleros, aseveración que fue desmentida por el BCP. El Ministro sudafricano declaró que su Gobierno revisaría su decisión si se le presentaban pruebas concluyentes de que tales personas eran estudiantes auténticos.

43. El Ministerio de Colonias del Reino Unido expresó la opinión de que "la gente que vive en Basutolandia debe poder salir libremente del país y regresar a él". Esta cuestión fue uno de los temas conversados por el Secretario de Estado para las Colonias y el Jefe Jonathan durante la visita que este último hizo a Londres a finales de agosto de 1965. Se informó que el Jefe Jonathan había dicho que no admitía el derecho de Sudáfrica a denegar el acceso de nacionales a su patria o de concederlo únicamente bajo condiciones.

44. A principios de septiembre de 1965, se informó que el Ministerio de Colonias del Reino Unido había autorizado al Gobierno de Basutolandia a iniciar conversaciones con Sudáfrica sobre asuntos de común interés y que, en futuras conversaciones, se fijaría entre los Gobiernos de Basutolandia y del Reino Unido la duración y la fecha de aquéllas.

45. En el mismo mes, se dijo que el Gobierno sudafricano había impuesto restricciones al despacho de determinado material impreso a Basutolandia. Dos revistas londinenses se quejaron de que sus números desaparecían antes de llegar al Territorio y que la policía sudafricana había secuestrado en un puesto de frontera 2.000 ejemplares de un documento sobre Basutolandia que se encontraban en el automóvil del Sr. B. M. Khaketla, miembro del Consejo Privado del Jefe Supremo y dirigente del Marema-Tlou Freedom Party (MTFP).

46. A raíz de las conversaciones mantenidas con la delegación de Basutolandia entre el 22 de noviembre y el 1º de diciembre de 1965, se informó que el Ministerio de Colonias del Reino Unido había accedido a que, siempre que se tuviese informado al Gobierno del Reino Unido, Basutolandia pudiera iniciar negociaciones con Sudáfrica sobre acceso, extradición, asuntos culturales, representación diplomática una vez alcanzada la independencia, trabajo y empleo, el plan hidroeléctrico del Ox-bow y asuntos comerciales, con la excepción de la revisión del acuerdo de unión aduanera. Nada se decía, sin embargo, que las conversaciones abarcaran la cuestión planteada a principios de noviembre de 1965 en la Asamblea Nacional de Basutolandia por el BCT, o sea la reincorporación a Basutolandia de una zona de Sudáfrica en el Estado Libre de Orange, Natal y Provincia Oriental de El Cabo.

47. Con respecto a esta cuestión, un portavoz del Gobierno en la Asamblea dijo que se le daría gran prioridad, aunque no inmediata. El Gobierno estimaba necesario esperar hasta que hubiera asumido plenos poderes a fin de poder negociar con Sudáfrica directamente, mientras que el BCP pedía que se celebrasen negociaciones con Sudáfrica por conducto del Gobierno del Reino Unido.

La cuestión de la independencia

48. Según se señalaba ya en el último informe del Comité Especial, la situación de los partidos políticos

en la Asamblea Nacional a raíz de las elecciones generales celebradas el 29 de abril de 1965 era la siguiente: Basutoland National Party (BNP), 31 puestos; Basutoland Congress Party (BCP), 25; y Marema-Tlou Freedom Party (MTFP), 4.

49. Inmediatamente después de las elecciones generales, el Jefe Leabua Jonathan, líder del BNP, dijo que pediría la independencia en la fecha más próxima que permitía la Constitución vigente, que se basaba en el acuerdo concluido en la Conferencia Constitucional de 1964; según tal Constitución, el Gobierno del Reino Unido concedería la independencia a Basutolandia un año después de las elecciones generales, siempre que recibiera una petición en tal sentido de la Asamblea Nacional de Basutolandia.

50. El 19 de julio de 1965, el Sr. Ntsu Mokhehle, jefe del BCP, dijo que su partido pediría que se aplazara la independencia de Basutolandia a menos que se celebrasen antes del 29 de abril de 1966 nuevas elecciones. El 19 de agosto de 1965, pidió al Jefe Supremo que disolviera la Asamblea Nacional de Basutolandia y nombrara un Gobierno provisional hasta que pudieran celebrarse nuevas elecciones. Alegaba que el BNP había perdido su mayoría en la Asamblea en virtud de la reciente decisión de la Alta Corte de Basutolandia de anular los resultados de las elecciones en dos distritos electorales.

51. Se informó que posteriormente el BNP había recuperado estos dos distritos en elecciones parciales. Con el prometido apoyo de un miembro del MTFP, el BNP disponía así de una mayoría de cuatro miembros en la Asamblea Nacional. También se informó que el partido gubernamental tenía asegurada suficiente mayoría en el Senado, pues 21 de los 22 jefes principales que constituían la mayoría de los 33 senadores habían ofrecido su apoyo al Gobierno. Con anterioridad a las elecciones generales, 18 de estos jefes habían apoyado al MTFP. Tres de los 11 senadores restantes pertenecían al BNP.

52. A principios de septiembre de 1965, tras haber celebrado conversaciones con el Secretario de Estado para las Colonias sobre la independencia, el Jefe Jonathan emitió un comunicado en el que declaraba que el Gobierno del Reino Unido había convenido sin reservas en adoptar medidas inmediatas que permitieran a su Gobierno iniciar la solución de los problemas que compartía con Sudáfrica y llevar adelante el despacho de los asuntos cotidianos. En el comunicado se añadía que las conversaciones habían abarcado una gran variedad de temas, inclusive la delegación de poderes en materia de asuntos exteriores y seguridad interna, el otorgamiento de poderes ejecutivos a la Comisión de Administración Civil y la africanización de la administración civil.

53. En la segunda serie de conversaciones constitucionales con el Gobierno del Reino Unido celebradas en noviembre y diciembre de 1965, el Jefe Jonathan

confirmó que su Gobierno pediría la independencia inmediatamente después del 29 de abril de 1966. La Sra. Eirene White, en nombre del Gobierno del Reino Unido, aceptó la declaración de intenciones del Jefe Jonathan y "las seguridades por éste dadas de que era probable que las condiciones estipuladas se cumplieran".

54. En febrero de 1966, los partidos de la oposición en la Asamblea de Basutolandia se declararon, según se informa, contra la independencia del Territorio bajo la administración del Jefe Jonathan, sosteniendo que como la mayoría de su partido era muy pequeña, carecía de poder para conducir a Basutolandia hacia la independencia.

Situación económica

55. Los recursos naturales de Basutolandia son limitados, siendo los principales su tierra cultivable, el agua y la mano de obra. La economía es fundamentalmente de subsistencia y las exportaciones consisten principalmente en madera y mohair. El Gobierno de Basutolandia ha orientado principalmente sus esfuerzos a mejorar la agricultura, pero el Territorio no se basta todavía a sí mismo en productos agrícolas. En estos últimos años, se han experimentado sequía y hambre en algunas partes del Territorio. El 7 de enero de 1966, el Reino Unido, Australia y Canadá acordaron un plan de urgencia para enviar cereales a las zonas afectadas por la sequía de Africa central y meridional, comprendida Basutolandia. Sin embargo, el plan tropezó con ciertas dificultades y no se llevó a la práctica.

56. En octubre de 1965, el Gobierno de Basutolandia dio comienzo, según se informa, a un programa urgente encaminado a hacer al Territorio agrícolamente viable en el término de tres a diez años mediante planes agrícolas progresivos y reformas agrarias.

Tierra

57. Se informa que, el 3 de agosto de 1965, el Jefe Jonathan, Primer Ministro de Basutolandia, declaró que las tierras de Basutolandia seguirían siendo de dominio público de la nación basuta. El Gobierno había accedido, sin embargo, en principio a que pudieran estipularse arriendos limitados por conducto de una corporación de fomento patrocinada por el Gobierno. Añadió que el Gobierno no pensaba apartarse fundamentalmente del sistema tradicional de tenencia de tierras, por lo que no concedería derechos de propiedad privada incondicional a ningún ocupante, africano o europeo.

Asistencia de las Naciones Unidas al Territorio

58. Los proyectos aprobados para 1965-1966 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), incluidas las asignaciones de urgencia, son en detalle los siguientes:

Programa aprobado de la categoría I	Costo (En dólares de los EE. UU.)	Expertos		Becas	
		Número	Meses	Número	Meses
ATNU — Estadística	19.200	1	12		
ATNU — Planificación y programación económicas	31.000	1	19		

Programa aprobado de la categoría I	Costo (En dólares de los EE. UU.)	Expertos		Becas	
		Número	Meses	Número	Meses
OIT — Cooperativas e industrias en pequeña escala	19.200	1	12		
FAO — Nutrición	12.800	1	8		
FAO — Instituciones y servicios rurales	24.600	2	16		
FAO — Producción y sanidad pecuarias	19.200	1	12		
UNESCO — Enseñanza de las ciencias	38.400	1	24		
OMS — Lucha contra la tuber- culosis	99.612	6	96		
TOTAL parcial de la categoría I	264.012				
<i>Proyectos para casos de urgencia</i>					
ATNU — Administración pú- blica	2.500			1	2
ATNU — Desarrollo de los recursos naturales y energía	6.400	2	4		
TOTAL parcial de los casos de urgencia	8.900				
TOTAL	272.912				

59. El 1° de enero de 1965 fue transferido al PAAT un experto estadístico designado el 1° de marzo de 1964 con cargo al programa ordinario de asistencia técnica; dicho experto terminó su misión en Basutolandia a fines de febrero. También otro experto fue enviado al Territorio a principios de agosto de 1965, por un año, para prestar asistencia en la ejecución de un programa de desarrollo de la comunidad.

60. En su programa para 1967-1968, la UNESCO se propone enviar a Basutolandia a un experto en planificación de la educación para un período de ocho meses, un experto en formación de maestros (ciencia) para un período de 24 meses y un experto en formación de maestros (educación) para un período de 16 meses. En 1965 concedió seis becas a personas del Territorio, cinco para un período de tres meses y medio en educación de adultos y alfabetización y una para un período de nueve meses en economía doméstica. También se propone conceder en 1968 una beca de un año a un basuto para el estudio de la planificación de la educación. Se concedieron subsidios de viaje a un miembro de la Basutoland Homemakers Association que comenzó un programa de estudios en Canadá en julio de 1965, así como a un basuto del World University Service para cursar en el extranjero técnicas para el bienestar de los estudiantes durante 1965-1966.

61. En los últimos seis años (1960-1965), el UNICEF ha asignado un total de 503.700 dólares para tres proyectos en Basutolandia, o sea: uno de higiene materno-infantil, otro de lucha contra la tuberculosis y el tercero de nutrición aplicada.

62. En 1965, la OMS concedió dos becas para cursar estudios en el extranjero sobre tecnología de laboratorio y radiología. Ha destinado 18.000 dólares para su programa de becas en 1966 en educación y formación médicas.

Situación social

Mano de obra

63. La última información que se tiene sobre trabajadores basutos en la República de Sudáfrica es la contenida en el informe del Secretario General a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones⁶.

64. En 1964 se inscribieron 1.253 personas (contra 1.779 en 1963) en la oficina de colocación de Maseru; 247 de ellas fueron colocadas. El descenso en el número de inscriptos durante el año no significó necesariamente una reducción del desempleo ya que se cree que muchas personas dejaron de recurrir a la oficina de colocación cuando se enteraron de que la inscripción no significaba de suyo la obtención de un empleo.

65. El número total de sindicatos en el Territorio era de ocho en 1964, uno más que el año anterior. Se dedican principalmente a negociar con los empleadores los casos de despidos. No ha habido conflictos laborales de importancia.

66. El salario mínimo de los trabajadores no calificados de uno y otro sexo empleados por el Gobierno fue elevado a seis chelines por día en abril de 1964. No han ocurrido cambios importantes en los salarios de los trabajadores empleados en el sector privado; los empleadores no han concluido ningún contrato colectivo formal sobre salarios con ningún sindicato.

67. Entre la legislación laboral aprobada en 1964 figura un nuevo proyecto de ley de empleo. Entre otras cosas prevé un salario mínimo similar, aplicable a las empresas privadas. El proyecto ha sido objeto de acerbos críticas por parte de las organizaciones de empleadores.

⁶ *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5958, anexo, cap. IV, párrs. 8 y 9.

*Evolución política y constitucional**Relaciones con Sudáfrica*

68. Tras su visita a Zambia en abril de 1965, el Sr. Seretse Khama, Primer Ministro de Bechuania, dijo que había celebrado conversaciones con el Presidente de Zambia acerca de una cooperación más estrecha entre ambos países y del mejoramiento de las comunicaciones. Bechuania estaba tratando de reducir su fuerte dependencia económica de Sudáfrica expandiendo su comercio con Zambia y otros Estados africanos, pero el principal producto comercial de su país, la carne, que significa un ingreso anual de 5 millones de libras, seguiría exportándose a Sudáfrica y no podría desviarse hacia Zambia.

69. El 6 de julio de 1965, el Sr. Khama declaró que Bechuania sufriría muchas privaciones en 1965 debido a la sequía y al hambre, pero que con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, establecido conjuntamente por las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el Gobierno podría hacer frente a la situación. Sin embargo, aunque el hambre se hacía sentir en forma crítica, la primera remesa de víveres enviada por el Programa Mundial de Alimentos sólo llegó en septiembre de 1965. Entre tanto, el Gobierno del Reino Unido autorizó al Gobierno de Bechuania a gastar hasta 35.000 libras mensuales en suministros de urgencia. Los pedidos para esos suministros se colocaron en Sudáfrica.

70. En un discurso que pronunció recientemente en un mitin del National Party en Upington, Sudáfrica, el Sr. Verwoerd declaró que, si bien Bechuania no había pedido alimentos, había solicitado que se acelerase el transporte de suministros que se le enviaban de otros países a través de Sudáfrica, así como también concesiones con respecto a los derechos de importación. El Sr. Verwoerd declaró que la República de Sudáfrica había accedido a ambas peticiones.

La cuestión de la independencia

71. El 9 de julio de 1965, el Sr. Phillip Matante, jefe del partido opositorista Bechuanaland Peoples Party (BPP), que ocupa tres de los 31 asientos de la Asamblea Legislativa, presentó una moción de censura. En esa moción, que fue luego rechazada, se criticaba al Gobierno por no haber adoptado las medidas apropiadas ante el problema de la sequía, y se alegaba que las elecciones generales celebradas el 1º de marzo de 1965 no habían sido imparciales. Según se informó, el Sr. Matante había manifestado que, caso de rechazarse la moción, pediría al Gobierno del Reino Unido que organizara un referéndum.

72. El 15 de julio de 1965, se informó que el Sr. David Morgan, Ministro de Trabajo y Comunicaciones de Bechuania, había declarado que cuanto antes lograra Bechuania la independencia, antes podría gestionar los capitales que necesitaba desesperadamente para su desarrollo. Agregó que el Gobierno del Reino Unido no se apresuraba a prestar asistencia financiera a Bechuania, a pesar de enfrentarse el país con la sequía más grave conocida en los últimos 30 años.

73. En la semana que terminó el 17 de julio de 1965, el Primer Ministro informó a la Asamblea Le-

gislativa que su Gobierno estaba celebrando conversaciones con el Reino Unido sobre la fecha de la independencia. En respuesta a una pregunta, dijo que tenía "un mandato del pueblo de Bechuania" de conducir al Territorio hacia la independencia sin necesidad de otra elección general.

74. El 13 de octubre de 1965, el Ministerio de Colonias del Reino Unido anunció que se había acordado en principio conceder la independencia a Bechuania el 30 de septiembre de 1966. Los proyectos de constitución del nuevo Estado independiente se prepararían en Bechuania y seguidamente habría una conferencia constitucional en Londres en el primer semestre de 1966 para redactar la constitución propiamente dicha.

75. El 13 de diciembre de 1965, el Sr. Khama informó a la Asamblea Legislativa acerca de las propuestas constitucionales que el Gobierno había completado. Con arreglo a esas propuestas, el Territorio adoptaría una forma republicana de gobierno y seguiría formando parte del Commonwealth británico como nuevo Estado de Botswana.

76. El Primer Ministro en funciones pasaría a ser automáticamente el primer Presidente de la República, titular pleno del poder ejecutivo y del mando de las fuerzas armadas. La Asamblea Legislativa se denominaría Asamblea Nacional y, junto con el Presidente, constituiría el Parlamento.

77. La legislatura se limitaría a períodos de cinco años como máximo. Todos los ciudadanos adultos tendrían el derecho de sufragio. La futura elección presidencial se combinaría con la elección de los miembros de la Asamblea y el Presidente necesitaría el apoyo de la mayoría de ésta para permanecer en el poder. El Presidente no sería miembro de la Asamblea y tendría la facultad de convocar, prorrogar o disolver la Asamblea en cualquier momento.

78. La designación del Presidente de la Corte correspondería al Presidente de la República, y la de los magistrados y jueces de menor jerarquía a una comisión de la judicatura.

79. La decisión de que Bechuania se transformaría en la República independiente de Botswana el 30 de septiembre de 1966 fue anunciada por el Secretario de Estado para las Colonias tras una conferencia constitucional celebrada en Londres del 14 al 20 de febrero de 1966, a la que asistieron los representantes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de Bechuania. El Secretario de Estado dijo que la constitución acerca de la cual se había llegado a un acuerdo en lo esencial había sido redactada en Bechuania y aprobada por la Asamblea Legislativa del Territorio antes de iniciarse la conferencia. Con arreglo a informes recibidos, el representante de la oposición, señor Phillip Matante, se negó a asistir a las dos últimas reuniones alegando que la conferencia debería haberse aplazado hasta que se celebrasen otras consultas.

Situación económica

80. La ganadería es el sostén principal de la economía de Bechuania y la mayoría de los habitantes deriva de la agricultura su subsistencia. El Territorio ha sufrido un serio revés económico en 1965 debido a la se-

quía más grave que lo ha asolado en los últimos decenios. El 8 de abril de 1965 el Gobierno de Bechuania declaró un estado de urgencia y presentó planes para combatir la sequía y el hambre. El 6 de julio de 1965 declaró que las cosechas de productos alimenticios habían quedado completamente devastadas, que aumentaba el número de indigentes y que la mortalidad del ganado sería elevada.

81. Según los informes, se esperaba que las importaciones de maíz llegaran a 350.000 sacos en 1965, contra un promedio de 56.000 sacos en los diez últimos años. En el mismo período, el Territorio había exportado un promedio de 51.000 sacos de sorgo, y en 1965 tendría que importar 100.000 sacos. Las pérdidas de ganado alcanzarían, sólo en el este del Territorio, a 250.000 cabezas, es decir la mitad de la población ganadera de la zona.

82. En mayo de 1965, el Programa Mundial de Alimentos convino en proporcionar al Territorio ayuda de urgencia por valor de 420.000 dólares. Este acuerdo se revisó a fin de proporcionar ayuda adicional por un total de 1.300.000 dólares en julio y unos 2.800.000 dólares en octubre. Los suministros de víveres provenientes del Programa Mundial de Alimentos se distribuyeron a más de 100.000 personas.

83. El 7 de enero de 1966, el Reino Unido, Canadá y Australia convinieron en un plan de urgencia para enviar cereales a Bechuania a fin de mitigar los efectos de la sequía prolongada. Pero el plan tropezó con varias dificultades y no se llevó a efecto.

84. La Sra. Eirene White (véanse los párrs. 8 a 11 *supra*) declaró recientemente que, a pesar de una serie de sequías desastrosas, Bechuania podía lograr progresos económicos considerables. De todos modos, no creía que en un futuro inmediato el Territorio pudiese mantenerse sin una ayuda importante del exterior. Una opinión similar fue expresada luego por el Primer Ministro que hizo hincapié en la gran necesidad de fondos para el desarrollo a fin de mejorar la agricultura, la educación y los servicios sociales del Territorio.

Agricultura y ganadería

85. Entre los planes para remediar la sequía implantados en 1965 figuraba la perforación de nuevos pozos en zonas provisionales de pastoreo y mejoras para conservar esos pozos, la utilización de los pastizales del campamento de veterinaria de Odiakwe, y el suministro de vitamina A y fósforo para mejorar las posibilidades de recuperación del ganado después de la sequía. El Gobierno ha fomentado también programas basados en el propio esfuerzo de agricultores africanos, suministrándoles semillas selectas de maíz a precios subvencionados.

86. Además, el Gobierno ha estimulado de diversos modos a los agricultores para que amplíen la produc-

ción de algodón. El Departamento de Agricultura ha introducido el cultivo de algodón de secano en la mayoría de las regiones y el de algodón de regadío en las zonas aluviales de Ngamiland. Durante la campaña de 1964-1965 se produjeron y exportaron a Sudáfrica cerca de 1.000 balas de algodón, y se espera llegar a las 3.000 balas en la campaña de 1965-1966. Se espera producir algodón en cantidades que justifiquen el establecimiento de una fábrica de hilados en el Territorio. El Departamento ha comprobado que los agricultores africanos muestran gran entusiasmo por el algodón y estima que Bechuania podría convertirse en un importante productor de tal artículo en un plazo de 10 años. Cree que el problema consiste ahora en evitar que los agricultores dediquen demasiada tierra al algodón, lo que reduciría los cultivos comestibles esenciales y dificultaría la recolección. Por último, se ha mostrado partidario de un gran número de pequeñas parcelas de cultivo intensivo y muy eficiente.

Minería

87. En noviembre de 1965 se anunció que el Gobierno de Bechuania había aprobado una solicitud de la razón social W. J. Engelbrecht y G. van den Brink para la prospección de diamantes en una zona de 11.500 kilómetros cuadrados situada al sudoeste de Maun, en el territorio de la tribu de los batawanas.

Comunicaciones

88. El ferrocarril de Ciudad de El Cabo a Bulawayo cruza por la región oriental de Bechuania. La parte de dicho ferrocarril que está en el interior del Territorio, de la que depende enteramente la industria ganadera, forma parte de las empresas de los Ferrocarriles de Rhodesia que es una entidad oficial. Los Ferrocarriles de Rhodesia son administrados conjuntamente en la actualidad por Rhodesia del Sur y Zambia. En virtud de un acuerdo concluido en 1959 entre los Ferrocarriles de Rhodesia y los Ferrocarriles de Sudáfrica cada una de estas entidades administra la mitad aproximadamente de la línea de 633 kilómetros de longitud situada en el interior del Territorio. En febrero de 1965 se anunció que los Ferrocarriles de Sudáfrica habían decidido poner fin al acuerdo en el plazo de seis meses; esa medida significa que los Ferrocarriles de Rhodesia se harán cargo de la totalidad de la línea.

Asistencia de las Naciones Unidas al Territorio

89. Ya se ha mencionado la ayuda de urgencia prestada al Territorio por el Programa Mundial de Alimentos. A continuación se dan detalles de los proyectos aprobados para 1965-1966 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), con inclusión de las asignaciones de urgencia:

Programa aprobado de la categoría I	Costo (En dólares de los EE. UU.)	Expertos		Becas		Equipo y suministros (En dólares de los EE. UU.)
		Número	Meses	Número	Meses	
OIT — Organización de la mano de obra	4.800	1	3			
OIT — Cooperativas e in- dustrias en pequeña escala	24.000	2	15			
FAO — Producción y sani- dad pecuarias	51.000	1	24	3	18	1.800

Programa aprobado de la categoría I	Costo (En dólares de los EE. UU.)	Expertos				Equipo y suministros (En dólares de los EE. UU.)
		Número	Meses	Número	Meses	
UNESCO — Formación de maestros	115.200	3	72			
OMS — Enseñanza de obs- tetricia	24.000	1	24			
OMS — Lucha contra la tri- panosomiasis	45.000	2	48			1.000
TOTAL parcial de la cate- goría I	264.000					
<i>Proyectos para casos de urgencia</i>						
OMM — Meteorología ..	15.400	1	9			
ATNU — Estadística ..	8.100	1	4	1	6	
ATNU — Programación y proyecciones económicas	10.000	1	4	1	6	
TOTAL parcial de los casos de urgencia	33.500					
TOTAL	297.500					

90. El programa ordinario de asistencia técnica para 1964 preveía la concesión de siete becas a personas del Territorio (seis de cuatro meses de duración y una de 10 meses) en materia de desarrollo de la comunidad. También se preveía lo pertinente para que un funcionario del Gobierno de Bechuania pudiese participar en el programa de formación colectiva en materia de asistencia técnica. En el ámbito del programa ordinario de 1965 se envió al Territorio a un experto, por un período inicial de un año, para que asesorase al Gobierno en lo relativo al desarrollo de la comunidad.

91. El programa de la UNESCO para 1965-1966 prevé los servicios de dos expertos en enseñanza de métodos pedagógicos, dos en enseñanza de artes y oficios, y dos en enseñanza de matemáticas, durante un período de 12 meses cada uno de ellos. En su programa para 1967-1968, la UNESCO se propone facilitar un experto en planificación de la enseñanza durante ocho meses, y tres expertos en formación de maestros durante 72 meses. También tiene el propósito de conceder una beca en planificación de la enseñanza para 1967, y otra en formación de maestros para 1967-1968. Se concedieron subsidios de viaje a la Boy Scouts Association para que uno de sus miembros de Bechuania pudiese recibir formación en el extranjero durante 1965-1966. A su regreso, será empleado en el centro de formación juvenil de Gaberones.

92. En 1965, el UNICEF asignó 65.000 dólares para el desarrollo de la enseñanza en Bechuania, y la OMS concedió una beca en materia de erradicación del paludismo a una persona del Territorio. También tiene el propósito de dedicar 18.000 dólares al programa de becas para 1966.

Situación social

Mano de obra

93. En 1964, el número de personas empleadas en el Territorio, aparte de las que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, era de 13.850 aproximadamente (contra 8.950 en el año anterior), siendo el Gobierno el empleador más importante. Otros 35.000 botswanos trabajaban en Sudáfrica.

94. El salario mínimo por hora de los trabajadores manuales del Gobierno era de 7 peniques para los no especializados, 1 chelín para los semiespecializados, y 1 chelín y 7 peniques para los especialistas.

95. El movimiento sindical está aún en una fase inicial de su desarrollo. Se ha preparado un programa provisional para la futura legislación laboral con objeto de modernizar las leyes existentes e introducir algunas disposiciones nuevas.

96. Las medidas de urgencia que se adoptaron a principios de 1965 para aliviar las circunstancias de hambre que imperaban en el Territorio comprendían la aceleración y ampliación de los programas de obras públicas para proporcionar 950.000 jornales por un importe total de 210.000 libras esterlinas, y la contratación de batawanas para trabajar en el Territorio y en el extranjero.

Sanidad

97. Después del hambre que sufrió el Territorio en 1965, hubo un aumento persistente del número de defunciones debidas a malnutrición. Con objeto de remediar esa situación, el Gobierno decidió suministrar alimentos ricos en vitaminas a unas 10.000 mujeres embarazadas, 15.000 madres lactantes, 110.000 niños de 1 a 7 años y 71.000 niños de edad escolar.

4. SWAZILANDIA

Evolución política y constitucional

Relaciones con Sudáfrica

98. En febrero de 1965, se informó que, a despecho de las gestiones hechas por el Gobierno de Swazilandia, Sudáfrica había prohibido al Sr. Allen Nxumalo, Presidente del Swaziland Democratic Party, que pasase por la República para ir a Tanzania.

99. El 30 de marzo de 1965 el Ministro de Servicios Técnicos Agrícolas de Sudáfrica señaló que, con la aprobación de las autoridades de Swazilandia, se estaban enviando inspectores y veterinarios al Territorio

para que ayudasen en la lucha contra la aftosa, y agregó que el brote de dicha enfermedad constituía una grave amenaza para la República.

100. El 11 de junio de 1965 se informó que el Ngwenyama había enviado una misión a los jefes de todos los principales países africanos. Había ordenado a la misión que estableciese las relaciones más amistosas posibles con los Estados africanos y asegurase a éstos que Swazilandia deseaba colaborar con ellos para asegurar la independencia real. El Ngwenyama dio a los Estados africanos garantías de su total rechazo de la política de apartheid y de su oposición a cualquier injerencia sudafricana en los asuntos de Swazilandia. También se pidió a la misión que explicara que la situación geográfica de Swazilandia respecto de Sudáfrica y Mozambique hacía que dependiera económicamente de esos vecinos.

101. El 4 de noviembre de 1965 se informó que un vocero de la policía de Swazilandia había declarado que dos policías sudafricanos habían cruzado la frontera, penetrado en el Territorio y llevado a un africano preso en una comisaría de Swazilandia para someterlo a juicio en la República; ni el oficial encargado del mando ni el Gobierno de Swazilandia habían dado su aprobación.

La cuestión de la independencia

102. En una reunión pública de los swazis celebrada el 22 de julio de 1965, el Ngwenyama manifestó que su Gobierno había solicitado al Ministerio de Colonias que se iniciasen a la brevedad conversaciones sobre la cuestión de la independencia de Swazilandia. En una declaración dada a conocer el mismo día, el Príncipe Makhosini Dlamini, dirigente del Imbokodvo Party, criticó la "táctica dilatoria" del Gobierno del Reino Unido y destacó que Swazilandia estaba presta para la independencia y quería poner fin a la dominación extranjera y al colonialismo "de una vez por todas".

103. Hacia fines de agosto de 1965 se nombró un comité local para que estudiase la actual Constitución de Swazilandia e hiciese recomendaciones detalladas al Secretario de Estado para las Colonias acerca de una nueva constitución. Componían el Comité el Comisionado de Su Majestad (Presidente), dos miembros oficiales (el Secretario Principal y el Fiscal General) y doce miembros no oficiales (ocho del Imbokodvo Party y cuatro de la United Swaziland Association) del Consejo Legislativo. En una declaración dirigida al Consejo Legislativo, el Secretario Principal señaló que se concedería a los partidos y grupos políticos no representados en el Consejo una oportunidad adecuada de expresar sus opiniones al Comité.

104. En marzo de 1966, las propuestas relativas a una nueva constitución, a las que el Comité había dado cima, fueron sometidas a la consideración del Secretario de Estado y presentadas al poder legislativo de Swazilandia para su examen. De conformidad con la nueva constitución propuesta, Swazilandia asumirá la autonomía interna en una fecha de 1966, según el sistema monárquico británico y bajo la protección del Reino Unido. El Jefe Supremo será reconocido como Rey y Jefe de Estado por todos los habitantes, tanto africanos como europeos. Existirá un Parlamento bicameral. La Cámara Baja, o Asamblea, estará compuesta por un Presidente, veinticuatro miembros elegidos por el sufragio universal de los adultos, otros seis miem-

bros nombrados por el Rey y el Fiscal General. La Cámara Alta tendrá un Presidente y doce miembros, la mitad de ellos elegidos por la Asamblea y la otra mitad nombrados por el Rey. Si el Gobierno del Reino Unido acepta estas propuestas constitucionales, se piensa que para 1970 Swazilandia será un reino independiente dentro del Commonwealth.

105. Con motivo de la creación del comité constitucional, varios dirigentes políticos, incluso el Sr. O. M. Mabuza, Presidente del Consejo Mixto de Partidos Políticos de Swazilandia, protestaron por el hecho de que hubiesen sido excluidos de dicho comité los representantes de los partidos nacionalistas de oposición. El Comité Mixto había presentado anteriormente un memorando al Ministerio de Colonias en el que solicitaba que se celebrase a la brevedad, en Londres, una conferencia cabalmente representativa para establecer los arreglos constitucionales correspondientes a la independencia sobre la base del sufragio universal de los adultos y la completa integración de los swazis dentro de los sistemas administrativo y económico del Territorio. El Consejo Mixto también lamentó que se hubiese infiltrado la política sudafricana en las principales esferas de la vida del Territorio.

"Localización" de la administración pública

106. En el discurso que dirigió al Consejo Legislativo el 12 de octubre de 1965, el Comisionado de Su Majestad señaló que el problema de la "localización" de la administración pública sería estudiado por una comisión, cuyo informe habría de quedar terminado a principios de 1966. (La Comisión, compuesta de un presidente (el Sr. F. C. Luke, de Sierra Leona) y dos miembros swazis, fue designada en octubre de 1965.) Señaló, asimismo, que ya se habían hecho considerables progresos en la esfera de la formación profesional para la administración pública con la reciente inauguración del Instituto de Formación de Personal, en Mbanane, y la Escuela de Formación de Policías, en Matsapa. El Comisionado opinaba que, si bien una formación profesional bien organizada para la administración pública podía contribuir mucho a acelerar la "localización", la solución básica del problema estribaba en el desarrollo del sistema educativo, a efectos de suministrar un número adecuado de candidatos capacitados.

Situación económica

107. En los últimos años han hecho progresos las industrias de propiedad o administración europea, principalmente las explotaciones agrícolas de regadío, las forestales y las mineras, que constituyen las principales fuentes de divisas del Territorio. En dichas industrias ha hecho importantes inversiones la Commonwealth Development Corporation, cuyos aportes totales aumentaron en unos 3 millones de libras esterlinas, o sea a 23 millones, en 1964. El valor total de las exportaciones en ese mismo año aumentó en unas 250.000 libras esterlinas, o sea a 11.165.000. Hasta la fecha el desarrollo del sector moderno de la economía ha tenido poco efecto en el sector de economía tradicional.

108. Se informó que el jefe del Imbokodvo Party, en una declaración del 22 de julio de 1965, dijo que las Potencias coloniales habían acentuado la diferencia entre el nivel de vida de los europeos y el de los swazis colonizados, y que el problema consistía en que

quienes tenían el poder se mostraban renuentes a dar oportunidades a los swazis.

109. El Comisionado de Su Majestad señaló en su discurso ante el Consejo Legislativo, el 12 de octubre de 1965, que en el plan de desarrollo para 1966-68 el Gobierno se proponía concentrar sus esfuerzos en la elevación del nivel de vida, especialmente para la población rural swazi, y en la reducción del desequilibrio existente entre los gastos y los ingresos anuales oficiales. Un corolario de esos objetivos sería la capacitación de un número creciente de swazis a fin de que pudieran desempeñar un papel cada vez más importante en los sectores públicos y privados de la economía del Territorio. El Gobierno confiaba plenamente en que Swazilandia contaba con el potencial humano y los recursos materiales para poder transformarse en un país feliz, autónomo y económicamente viable. Sin embargo, el Gobierno no ignoraba que en esos instantes el Territorio no disponía de suficientes capitales ni conocimientos técnicos especializados para aprovechar ese potencial. En consecuencia, debía seguir procurando asistencia externa.

110. El Comisionado de Su Majestad dijo también que era probable que el Gobierno del Reino Unido concediese un subsidio a Swazilandia para sufragar los gastos de desarrollo correspondientes al trienio iniciado el 1° de abril de 1965, el cual sería mayor que cuantos había recibido el Territorio en el pasado. (El 8 de febrero de 1966 se anunció que para 1966-68 se habían hecho asignaciones, con cargo a los recursos de desarrollo y bienestar colonial, por un total de 3.900.000 libras esterlinas, suma que representaba un incremento de 1.238.000 libras esterlinas respecto de los tres años anteriores.) El Comisionado esperaba que durante ese período también se dispondría de ayuda financiera y técnica para el desarrollo procedente de otras fuentes distintas del Reino Unido. Señaló que una misión económica del Ministerio de Desarrollo de Ultramar iba a visitar el Territorio a fines de noviembre de 1965, y agregó que confiaba en que, a base de sus comprobaciones, el Gobierno del Reino Unido proporcionara más asistencia de capital. Añadió que el Gobierno estaba estudiando posibles formas de acrecentar los ingresos internos.

Agricultura y ganadería

111. Los productos agrícolas representaron el 75% del comercio de exportación de Swazilandia en 1964, que en su mayoría produjo en explotaciones agrícolas de regadíos de propiedad europea. Los agricultores europeos formularon planes para una rápida expansión de la producción de ciertos cultivos de regadío, principalmente del azúcar y de los frutos cítricos.

112. El Territorio no se basta totalmente a sí mismo en lo que se refiere a productos alimenticios tales como el maíz, que constituye el alimento esencial de los swazis. En consecuencia, en abril de 1965 el Departamento de Agricultura inició una campaña para estimular a los agricultores a que adoptasen el método de cultivo del maíz perfeccionado por la estación de investigaciones de Malkerns.

113. Con respecto al desarrollo de la agricultura y la ganadería, el Comisionado de Su Majestad dijo en un discurso pronunciado recientemente ante el Consejo Legislativo:

“La política agrícola del Gobierno tiene la principal finalidad de elevar el nivel de vida, principal-

mente para la población rural. Se procurará estimular la producción de Swazilandia y desarrollarla todo lo posible para que de una economía de subsistencia se convierta en una economía monetaria. Los esfuerzos se concentrarán en determinadas zonas mediante una planificación racional del uso de la tierra para proyectos de desarrollo rural.

“Se estudiarán las posibilidades de realizar planes experimentales de colonización en tierras que se arrendarán a particulares para la producción de cultivos comerciales de mayor valor y de ganado de mejor calidad.

“Un complemento de importancia vital para dicha política será la creación del Swaziland Credit and Savings Bank, que proporcionará créditos supervisados a los agricultores. También desempeñarán un papel importante las iniciativas de la empresa privada, por ejemplo, los nuevos proyectos relacionados con la industria de la carne y la elaboración del algodón.

“El desarrollo agrícola ha sufrido por la falta de servicios de instrucción apropiados para los pequeños agricultores, pero la inauguración — el año próximo — del Colegio Agrícola de Malkerns contribuirá mucho a resolver el problema tanto en la capacitación de los agricultores que trabajan por cuenta propia como en la del personal de divulgación del Departamento de Agricultura.

“La apropiada utilización de nuestros recursos hidráulicos constituirá un aspecto importante en todo desarrollo económico de Swazilandia. Las Naciones Unidas nos están proporcionando asistencia técnica para que podamos pedir a su Fondo Especial que financie una investigación integral de la cuenca del Usuto... La Comisión de legislación sobre el agua... está redactando un informe y propuestas para una nueva ley...

“...Para fines de año se espera que se hayan formado ocho cooperativas de productores, tras un período de preparación básica sobre cooperativismo.”

Industria

114. En su discurso el Comisionado de Su Majestad declaró que la explotación minera continuaba en condiciones satisfactorias y que había esperanzas de que se ampliara la actividad de las minas del carbón. Se habían hecho progresos en la conglomeración industrial de Matsapa. Recientemente se habían inaugurado algunas empresas, entre las cuales figuraban las primeras industrias del algodón y de la carne del Territorio, y se habían vendido solares para otras industrias secundarias.

Comunicaciones

115. El Gobierno del Reino Unido aprobó un subsidio de 50.000 libras esterlinas para la construcción de una carretera de acceso desde Sidvokodvo al Grand Valley, a fin de abrir una zona del Territorio que hasta ahora ha sido en parte inaccesible. Dentro de los límites de los recursos financieros disponibles, el Gobierno se propone ampliar su programa de vialidad.

Asistencia de las Naciones Unidas al Territorio

116. Los detalles de los proyectos aprobados en virtud del PAAT para 1965-1966, con inclusión de las asignaciones para casos de urgencia, son los siguientes:

<i>Programa aprobado de la categoría I</i>	<i>Costo (En dólares de los EE. UU.)</i>	<i>Expertos</i>		<i>Becas</i>		<i>Equipo y suministros (En dólares de los EE. UU.)</i>
		<i>Número</i>	<i>Meses</i>	<i>Número</i>	<i>Meses</i>	
Proyecto de estadísticas (ATNU)	38.400	1	24			
Programación económica y proyecciones (ATNU) ..	25.900	1	16			
Organización de la fuerza de trabajo (OIT)	4.800	1	3			
Instituciones y servicios ru- rales (FAO)	33.100	1	11			
Lucha contra la tuberculo- sis (OMS)	148.236	6	144			1.000
TOTAL PARCIAL, categoría I	268.036					
<i>Proyecto de urgencia</i>						
Administración pública (ATNU)	2.500			1	2	
Aprovechamiento de la tierra y del agua (FAO)	8.000	2	4			
TOTAL PARCIAL, proyectos de urgencia	10.500					
TOTAL	278.536					

117. En virtud del programa ordinario de asistencia técnica para 1965 se ha contratado un experto por un año para que asesore a las autoridades de Swazilandia en organización y capacitación para el desarrollo de la comunidad.

118. En junio de 1965 el Fondo Especial proporcionó 462.900 dólares para sufragar parte de los gastos de una investigación geofísica aérea del Territorio.

119. En 1965 la FAO concedió becas por un año a dos personas del Territorio para que se especializaran en divulgación agrícola y horticultura.

120. En 1965 la UNESCO concedió una beca en planificación de la enseñanza. Se propone también contratar a un experto y conceder una beca en el mismo campo para 1967-1968. Un miembro del Swaziland Trade Union Congress recibió un subsidio a fin de emprender un programa de estudios en Uganda de febrero a mayo de 1964.

121. En el período de 1961-1965 el UNICEF hizo una asignación de 186.900 dólares que se utilizaron para formular proyectos de servicios sanitarios básicos y nutrición aplicada.

122. En 1965 la OMS concedió una beca en erradicación del paludismo, y en virtud del programa de capacitación para la enseñanza en 1966 se propone asignar 16.000 dólares para becas.

Situación social

Mano de obra

123. En 1964 había 25.470 africanos empleados (incluidos 5.680 africanos extranjeros), lo que representa el 17% de la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Según el Comisionado de Trabajo, el principal problema a que ha de hacer frente su Departamento es la necesidad de procurar 2.100 nuevas colocaciones anualmente, cifra que se elevará a 2.500 en 1970, en proporción al aumento esperado en la po-

blación en edad de trabajar. Con esto se relaciona también la urgente necesidad de dar formación profesional e industrial para poner a las poblaciones locales en condiciones de participar plenamente en el empleo actual y futuro.

124. Entre las medidas ya adoptadas o previstas para combatir este problema figuran el establecimiento de agencias de colocación, el control más estricto de la inmigración, programas de capacitación y la creación de un organismo planificador de la mano de obra que mantenga al día estadísticas detalladas y que asesore a los planificadores del desarrollo acerca de las necesidades de empleo y mano de obra.

125. Los salarios medios mensuales de los trabajadores africanos han continuado elevándose, pero todavía eran muy inferiores a los percibidos por los trabajadores europeos. En 1964 el número total de sindicatos registrados era de quince (un aumento de siete sobre el año anterior). Se negociaron trece nuevos convenios aplicables a 5.000 trabajadores.

126. El Consejo Consultivo Mixto Nacional, integrado por representantes de los empleadores, los asalariados y el Departamento de Trabajo, celebró su reunión inaugural en julio de 1964. La principal función del Consejo es promover una cooperación eficaz entre los dos sectores de la industria: los empleadores y los trabajadores. En el siguiente mes se estableció el primer consejo de Swazilandia para el estudio de los salarios (The Wholesale and Retail Distributive Trades Wages Council).

127. Hubo nueve conflictos laborales que afectaron a 572 trabajadores y dieron lugar a la pérdida de 4.130 días-hombre. Entre las disposiciones legislativas recientemente promulgadas que rigen las relaciones de trabajo se encuentra la *Industrial Conciliation and Settlement (Amendment) Proclamation* de 1964, por la que se modifica la ley principal a fin de hacer obligatorio el registro de los convenios industriales negociados sobre salarios y condiciones de trabajo.

Sanidad

128. En el discurso que pronunció recientemente ante el Consejo Legislativo, el Comisionado de Su Majestad declaró que el Departamento Médico estaba tropezando con dificultades considerables para contratar médicos, lo cual obstaculizaba sus esfuerzos para satisfacer la creciente demanda de servicios de sanidad. Existía el proyecto de mejorar pronto los servicios hospitalarios mediante ampliaciones del Hospital de Hlatikulu y la construcción de nuevas clínicas. Se seguiría trabajando en el proyecto de lucha contra la tuberculosis emprendido con asistencia de la OMS y el UNICEF, con objeto de determinar los métodos más eficaces para resolver el principal problema sanitario de Swazilandia.

Situación de la enseñanza

129. El nuevo Decreto sobre educación que fue promulgado el 8 de mayo de 1964 derogó los Decretos sobre escuelas para africanos, para personas de color y para europeos, y creó la Junta Central Asesora sobre Educación y cuatro Comités de distrito asesores en la misma materia, de carácter no racial.

130. En 1963/1964 los gastos públicos para la enseñanza ascendieron a 721.572 libras esterlinas, lo que supone un aumento de 42.772 libras respecto al año anterior. Las subvenciones para educación hechas por el Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial ascendieron en total a 148.595 libras y los gastos a cargo de las misiones a 148.000 libras.

131. En 1964 la matrícula en las escuelas primarias, secundarias, de formación de maestros, técnicas y de oficios era la siguiente:

	Escuelas	Matrículas	Profesores
Enseñanza primaria ^a	342	47.894	1.487
Enseñanza secundaria ^b	32	2.783	168
Formación de maestros ^c ...	3	131	19
Enseñanza técnica y de oficios ^c	3	96	10

^a Incluidas 325 escuelas africanas con 46.038 estudiantes y 1.402 profesores.

^b Incluidas 25 escuelas africanas con 2.247 estudiantes y 119 profesores.

^c Para africanos solamente.

132. Durante el año 1964 la edad para ser recibidos por primera vez en las escuelas primarias se rebajó a nueve años, y la admisión en tales escuelas se limitó a niños cuyos padres sean residentes en Swazilandia. Se han puesto limitaciones estrictas a la entrada de estudiantes que no sean naturales de Swazilandia en escuelas y colegios de enseñanza postprimaria.

133. Continuó la política de integración de las diversas razas en la enseñanza primaria, y más de 50 niños de diversas razas fueron matriculados en las escuelas intermedias inglesas. La introducción de un programa de estudios común para todas las razas llegó al nivel del tercer año ("Standard I"). El "Plan inglés" estaba en vigor en más de 30 escuelas africanas. Se había pedido que este Plan se introdujese con carácter general en todas las escuelas primarias, pero ello no fue posible debido a la falta de recursos financieros y de profesores adecuados.

134. Los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes de las escuelas primarias, secundarias y de formación de maestros durante el año 1964 fueron como sigue:

	Presentados	Aprobados
Standard VI	2.074	1.024
Form I	436	289
Certificado secundario	463	292
Certificado para ingresar en la UBBS o de matriculación sudafricana	109	46
Certificado primario inferior	26	19
Certificado primario superior	30	8
Certificado de estudios en economía doméstica	6	5

135. Con respecto al desarrollo de la enseñanza, el Comisionado de Su Majestad declaró en el discurso que pronunció recientemente ante el Consejo Legislativo:

"En definitiva, los objetivos consisten en que la educación primaria cuente con locales adecuados y esté al alcance de todo niño que la desee; en que el sistema de enseñanza secundaria, recibiendo de las escuelas primarias a los mejores candidatos posibles, satisfaga las necesidades de cada niño en particular y del país en general; en que se forme el número necesario de maestros calificados; y en proporcionar suficientes oportunidades de educación superior o de formación profesional para satisfacer las necesidades del Territorio.

"En cuanto a los objetivos a largo plazo de la política educativa, han de ser considerados a la luz de nuestros recursos financieros y materiales, y nos parece que durante el año o los dos años próximos lo mejor será concentrar nuestros esfuerzos en la educación secundaria, la formación de maestros y la enseñanza técnica.

"... El Departamento de Educación sufre en la actualidad una gran escasez de personal. Vamos a buscar medios de superar esta dificultad como cuestión de urgencia."

C. EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

136. El Comité Especial examinó la situación de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia en sus sesiones 421a. a 423a., 437a. a 439a., 450a. y 455a., celebradas en Africa entre el 26 de mayo y el 22 de junio de 1966.

Peticiones escritas y audiencias

137. El Comité Especial recibió las siguientes peticiones escritas:

Peticionario	Documento No.
<i>Basutolandia, Bechuania y Swazilandia</i>	
Sr. P. Raboroko, Secretario de Educación, Pan-Africanist Congress of South Africa (PAC)	A/AC.109/PET.461
<i>Basutolandia</i>	
Sr. Ntsu Mokhehle, Presidente del Basutoland Congress Party	

Petionario

Documento No.

(BCP) y Sr. Seth Makotoko,
Presidente del Marema-Tlou
Freedom Party (MTFP) ... A/AC.109/PET.515

Swazilandia

Sr. J. J. Nquku, Presidente, y
Sr. A. W. M. Nxumalo, Se-
cretario General del Swaziland
Progressive Party (SPP) .. A/AC.109/PET.442 y
Add.1 y 2

Sr. S. J. Zwane, representante
en el exterior del Ngwane
National Liberatory Congress
(NNLC) de Swazilandia, Ofi-
cina en el exterior, Dar es Sa-
laam A/AC.109/PET.462

138. El Comité Especial concedió audiencia a los
siguientes peticionarios:

Basutolandia, Bechuania y Swazi-
landia

Sr. P. Raboroko, Secretario de
Educación, y otros dos miem-
bros (los Sres. P. K. Leballo
y A. B. Ngcobo), Pan-Afri-
canist Congress of South
Africa (PAC) (A/AC.109/
PET.461) (Sesiones 412a. a 423a.)

Swazilandia

Sr. S. J. Zwane, representante
en el exterior, Ngwane Na-
tional Liberatory Congress de
Swazilandia (MNLK), Oficina
en el exterior, Dar es Salaam
(A/AC.109/PET.462) (423a. sesión)

139. El Sr. Raboroko, hablando en nombre del Pan-Africanist Congress of South Africa (PAC), dijo que el PAC era una organización para la liberación del pueblo africano de Sudáfrica, dedicada a la liberación de Sudáfrica en particular y del resto de Africa colonial en general. La *South Africa Act* de 1909, promulgada por el Gobierno del Reino Unido, estableció las bases constitucionales de lo que se conoce generalmente por República de Sudáfrica. El artículo 151 de esa ley preveía la incorporación de los antiguos Territorios del Alto Comisionado — Basutolandia (Lesotho), Bechuania (Botswana) y Swazilandia (Ngwane) — a la estructura política de Sudáfrica. El PAC y el pueblo africano de Sudáfrica eran, pues, partes interesadas en la evolución constitucional de esos Territorios. La *South Africa Act* era la expresión de la alianza económica de los intereses feudales de los bóers y los intereses mineros y financieros británicos.

140. Reforzados por el mito de la superioridad racial y el consiguiente mito imperialista de la superioridad cultural, esos intereses extranjeros convirtieron a Sudáfrica en la zona de saqueo más grande del mundo y a la mayoría de la población sudafricana en el pueblo más oprimido, explotado y degradado de la tierra. El fenómeno se conocía por el nombre de apartheid, pero sería más correcto llamarlo colonialismo fascista.

141. El Pan-Africanist Congress y el pueblo africano de Sudáfrica consideraban que los Territorios sólo serían auténticamente independientes cuando lo fuera la supuesta República de Sudáfrica. Para ello era necesario que la sociedad fascista y colonialista que dominaba a Sudáfrica se transformara en una democracia socialista no racial.

142. Añadió que tenía la intención de demostrar la confabulación entre el imperialismo británico y el colonialismo fascista sudafricano para afianzar la subyugación del pueblo de Sudáfrica y de los Territorios.

143. Los Territorios eran inmensas reservas de mano de obra barata para los intereses creados extranjeros instalados en Sudáfrica. Esa era la principal razón por la que el Gobierno del Reino Unido, representante político del imperialismo británico, estaba en connivencia con las autoridades sudafricanas — representantes políticos a su vez de los capitalistas feudales locales — con la intención de anexar esos Territorios.

144. En las minas de oro del Transvaal y del Estado Libre de Orange trabajaban 380.000 mineros africanos, 20% de los cuales procedían de esas colonias. Sudáfrica reclutaba esos miembros por mediación de la Native Recruiting Corporation. Todos ellos se consideraban como trabajadores bajo contrato (*indentured labourers*). Este sistema era la forma tomada por la esclavitud en el siglo XX. Los trabajadores debían pagar el viaje de regreso a su hogar con sus ahorros y en las minas vivían en miserables condiciones. Cada barracón tenía unas 200 habitaciones, que median 20 pies por 30. En cada dormitorio se alojaba un mínimo de 16 trabajadores, la mayoría de los cuales dormían en literas de cemento.

145. El jornal medio de los mineros africanos, que en 1896 era de 3 chelines, sólo había aumentado en 4 chelines diarios en 1964, 68 años después. Durante este período los propietarios de las minas sacaron enormes dividendos del trabajo de sus mineros. Entre 1886 y 1932 las sociedades que explotaban las minas de oro invirtieron 200 millones de libras esterlinas y recibieron dividendos de 255 millones de libras esterlinas. En 1945, tras 60 años de explotación aurífera, los accionistas habían recibido 479 millones de libras esterlinas en dividendos. En 1964 el Comité de "productores de oro" elevó el salario de los mineros en un 10%, únicamente. Aun así, el minero africano de la cuenca cuprífera de Zambia ganaba seis veces más que su contraparte africana en Sudáfrica. Los mineros africanos no podían participar en negociaciones colectivas.

146. Las fuerzas del imperialismo británico y del colonialismo fascista sudafricano mutilaron también la economía y la vida social de los Territorios del Alto Comisionado. El Gobierno del Reino Unido permitió a muchos sudafricanos comprar terrenos, establecer empresas comerciales e industriales y prestar servicio como funcionarios en los Territorios, lo que era contrario a los intereses de los habitantes autóctonos. Como parte de la misma tendencia se asignó una nueva función a los jefes tradicionales. Bajo el colonialismo, su función era la de agentes encargados de la misión de recaudar impuestos, reclutar trabajadores y ayudar en general a oprimir a la población. La marea ascendente de las fuerzas del nacionalismo africano obligó a los imperialistas británicos y a los colonialistas sudafricanos a adaptar el papel y la función de los jefes a condiciones nuevas y cambiantes. En la actualidad se les animaba a presentarse como candidatos en las elecciones con el apoyo del régimen. La actitud de las nuevas autoridades con los fugitivos políticos era similar a la de los jefes de los bantustanes. Estaba generalizada en los Territorios la práctica de las elecciones fraudulentas. Los jefes reflejarían el consentimiento a la incorporación de esos Territorios a Sudáfrica sin previa consulta a los pueblos mismos, que aborrecían el apartheid.

147. Se daba por sentado que, además del 12,5% de las tierras asignadas a los africanos en Sudáfrica, el Gobierno podría dentro de poco declarar al mundo que su generosidad había dado al pueblo africano de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia una superficie equivalente a la del resto de la República. El Sr. Raboroko desearía que el Comité realizara una investigación en los propios Territorios para determinar la actitud de la población respecto a las políticas de neopartheid del régimen.

148. El Pan-Africanist Congress y el pueblo africano de Sudáfrica recomendaban que el Comité Especial reconociera la unidad fundamental y la indivisibilidad de la libertad e independencia de los pueblos de esos Territorios y de la República colonial de Sudáfrica. También era necesario que se garantizara la integridad territorial de esas colonias y se prohibiera a los racistas sudafricanos controlar el derecho a entrar y salir de los Territorios. A todas las personas en tránsito hacia los Territorios o procedentes de ellos se les debería garantizar la inmunidad contra las leyes de apartheid. Se había de garantizar la libertad política y el desarrollo económico de los Territorios, sin injerencia de las fuerzas reaccionarias de la República de Sudáfrica. Como preludio a la solución de los problemas coloniales en los Territorios, se debería apoyar resueltamente la causa de la libertad, la verdadera independencia y la democracia de Sudáfrica.

149. En respuesta a algunas preguntas, los Sres. Raboroko y Ngcobo dijeron que los tres Territorios estaban en tal situación de servidumbre económica, política y social con respecto a Sudáfrica, que les resultaba muy difícil sobrevivir económicamente.

150. Añadieron que los esfuerzos, cada día más intensos, de Sudáfrica por controlar al electorado empeoraban aún más la situación. Citaron muchos ejemplos para demostrar que las últimas elecciones celebradas en los Territorios habían sido fraudulentas y declararon que los regímenes actuales no eran representativos. En el resultado de las elecciones habían influido también los movimientos de tropas británicas y la intimidación de la policía. Por consiguiente, instaron al Comité Especial a que hiciera cuanto estuviera en su poder para que esas elecciones se declararan nulas. Deberían celebrarse nuevas elecciones, sin emisiones radiofónicas de propaganda de Sudáfrica y bajo una inspección digna de confianza. El PAC no quería que se retrase la independencia, pero deseaba que antes se celebraran unas elecciones auténticas.

151. Las graves consecuencias de la injerencia de Sudáfrica en los asuntos de Basutolandia podían verse en una carta dirigida el 18 de noviembre de 1964 por el Jefe Leabua Johathan a Papenfus, el administrador bantú del Estado Libre de Orange, partidario del régimen de Verwoerd. La carta dice así:

“... Nos ha prometido Ud. que si con ayuda de su Gobierno ganamos las elecciones que se celebrarán en Basutolandia y seguimos su política, su Gobierno nos devolverá Witzieshoek, Mataliele, Herschel y la parte del Estado Libre de Orange que limita con Basutolandia, desde Fouriesburg a Wepener, a fin de que podamos formar una Basutolandia más grande y permitir a su Gobierno corregir pasados errores ... y para demostrar nuestro agradecimiento por esa generosa oferta pondremos a este país y a su pueblo bajo la sabia dirección económica, política y social del Go-

bierno de la República de Sudáfrica, a fin de que pueda Ud. conducirla a la verdadera independencia.

“Dice Ud. que le desagrada el apoyo que me da la Iglesia Católica por considerar a ésta resueltamente contraria a la buena política en materia de educación adoptada por su Gobierno para el pueblo bantú. Hasta me dice Ud. que esa educación ha hecho maravillas en el Transkei. Le repito que no debe temer Ud. nada de mí. Cuando tenga el Gobierno en mis manos después de las elecciones hallaremos algún modo de eliminar el peligro que representa la Iglesia Católica, pero por el momento lo acertado es servirse de ella para conseguir el apoyo de la gran mayoría de los católicos de este país.”

Se pensaba que la Iglesia Católica era peligrosa, no tanto por consideraciones políticas sino por temerse que contribuyera a disminuir la dependencia económica de Basutolandia con respecto a Sudáfrica.

152. El peticionario añadió que Sudáfrica violaba las normas de cortesía internacional que regían el tránsito hacia los países sin litoral. Se fichaba y perseguía a la gente y los aviones que utilizaban el espacio aéreo de Sudáfrica tenían que aterrizar y someterse a una inspección. Era urgente adoptar leyes para garantizar el libre tránsito.

153. La alianza entre Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur dificultaba mucho la situación en los tres Territorios. Cuando se negó al pueblo de Bechuania, por ejemplo, el derecho a pasar por Sudáfrica, se acostumbró a pasar a Zambia por Rhodesia del Sur. Pero ya se había prohibido eso también de modo que se tenía que usar la faja de Caprivi, que estaba infestada de animales salvajes y carecía de medios de comunicación. La caída del régimen de Smith en Rhodesia del Sur y del régimen de Salazar en Mozambique daría a Bechuania y a Swazilandia acceso al norte.

154. Los tres Territorios dependían del sistema económico de Sudáfrica. La incapacidad de la población africana de esos Territorios para satisfacer por sí misma sus necesidades económicas se debía a los largos años de explotación colonial.

155. Las empresas registradas en Sudáfrica pero cuyas actividades se realizaban en los Territorios eran firmas anglonorteamericanas. El Sr. Carl Todd desempeñaba un siniestro papel; estaba asociado a la Cámara de Minas de Sudáfrica y controlaba intereses mineros, establecimientos ganaderos y plantaciones de azúcar en Swazilandia. También estaba asociado a una nueva empresa británica de la firma Yarrow (Africa) Ltd. ocupada normalmente en construcciones navales e ingeniería civil pero interesada en constituir una flota para el régimen de apartheid y fabricar armas en Sudáfrica. Esto anularía, desde luego, el efecto de las medidas adoptadas para impedir la llegada de armamentos al país. El Coronel Jack Scott, director de una empresa minera de Sudáfrica, tenía intereses en las minas de diamantes de Basutolandia. La Machine Company, firma sudafricana, se dedicaba a la extracción de asbesto y manganeso en la región de Bangwaketse en Botswana. El grupo de la de Beers y la Anglo-American (en manos de Oppenheimer) se dedicaba a la prospección de diamantes en Botswana. La Vacuum Oil Company of South Africa, que empezó con la prospección de petróleo en Botswana, había transferido esas operaciones a Mobiloil. La línea ferroviaria de Swazilandia, que pasaba por Mozambique, había sido establecida con capital sudafricano. La Swaziland Iron Ore Development Company, em-

presa conjunta de la Anglo-American Corporation y la firma industrial británica de Guest, Keen and Nettlefolds, tenía un contrato de 12 años para suministrar mineral de hierro al consorcio japonés Yawata y Fuji, dedicado a la explotación de hierro y acero.

156. Algunas de las sociedades internacionales de Sudáfrica que practicaban el apartheid estaban financiadas con capital local; pero las que se dedicaban más intensamente a esa práctica estaban financiadas con capitales internacionales del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Señaló el caso de Engelhard, ciudadano norteamericano miembro del Partido Demócrata cuyos considerables intereses controlaban empresas en Sudáfrica, sobre todo en minería. El First National City Bank de Nueva York y el Chase Manhattan Bank, cuyo Presidente era el Sr. David Rockefeller, aumentaron sus propias inversiones en Sudáfrica. Además, cuando en 1960 después de las matanzas de Sharpeville la economía de Sudáfrica estaba al borde de la quiebra, fueron esos dos bancos los que prestaron dinero para restablecerla sobre bases firmes. La Imperial Chemical Industries, empresa británica que empleaba un gran número de personas en todo el territorio de Sudáfrica, se embarcó últimamente en una empresa peligrosa en extremo para los africanos, a saber, la fabricación de explosivos y otros materiales de guerra. Aunque estaba en vigor un embargo sobre la importación de armas procedentes del Reino Unido y los Estados Unidos, de hecho se fabricaban en la localidad. El apartheid estaba reforzado por los consorcios internacionales que sin duda quitarían toda eficacia a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana referentes a la exportación de armas a Sudáfrica. El General Norstad, antiguo funcionario de la OTAN, había llegado recientemente a Sudáfrica para establecer otra sociedad que también fabricaría armas y municiones.

157. En Swazilandia el 55% de las tierras, las más fértiles, eran propiedad de los blancos, principalmente sudafricanos. Pero en 1955 se estableció un plan para recaudar fondos que permitiesen al pueblo africano comprar sus propias tierras. En Bechuania, donde estaban algunas de las mejores zonas de pastos, la situación era la misma; grandes consorcios establecidos en Sudáfrica habían comprado vastas extensiones de tierra y estaban dominando el mercado. La situación era diferente en Basutolandia porque toda la tierra estaba nacionalizada y pertenecía al pueblo basuto. Por consiguiente, ningún consorcio extranjero podía comprar tierras. Señaló que el sistema de tenencia de la tierra en los Territorios era análogo al de Sudáfrica, donde el 12.5% de las tierras — las más pobres — estaban reservadas a los africanos. Añadió que en el inciso e) del párrafo 17 del informe del Comité Constitucional de Swazilandia se garantizaba que nadie sería privado de su propiedad, lo que permitía a los intereses extranjeros mantener su control al amparo de una independencia ficticia. El Comité Especial debería instar a las Naciones Unidas a enviar observadores para asegurarse de que las tierras fueran restituidas a la población como preludio a la independencia.

158. Gran número de trabajadores iban a buscar trabajo a Sudáfrica porque en los Territorios no había suficientes oportunidades de empleo y los salarios eran muy bajos. Esos trabajadores eran contratados por empresas sudafricanas, entre cuyas prácticas se contaba la de retener los salarios de los empleados hasta el final

de su contrato, sin pagar interés alguno. Además se sometía a esos trabajadores migrantes a todas las indignidades del sistema de apartheid.

159. La situación sanitaria en los tres Territorios era deplorable; los servicios médicos eran insuficientes. Existían establecimientos de enseñanza, pero el porcentaje de la población que podía beneficiarse de esas instituciones era muy bajo. Además, la mayoría del personal docente procedía de Sudáfrica y traía consigo las actitudes y la mentalidad prevalecientes en ese país. La situación era lamentable y el nivel de educación sumamente bajo. El problema de la educación era un círculo vicioso. Era preciso obtener primero el poder político y la independencia, sin los cuales no se podía contar con un sistema adecuado de educación.

160. Hasta la fecha no se había tomado medida alguna para salvaguardar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios. Hubiese o no un representante residente de las Naciones Unidas en cada Territorio, el Comité Especial debería instar a la Asamblea General a que se asegurase de que no se concedía la independencia sin que previamente se celebraran elecciones auténticamente libres y se resolviera el problema de la tierra. Debería garantizarse asimismo por una disposición internacional el derecho de tránsito.

161. Los Territorios se asociarían a la Organización de la Unidad Africana después de su independencia. Por lo tanto, era vitalmente importante que los elementos nacionalistas ganasen el poder para impedir que un gobierno títere disfrutase de impunidad.

162. El Sr. Zwane, hablando en nombre del Ngwane National Liberatory Congress (NNLC), declaró que su partido le había encargado presentarse ante el Comité Especial para exponerle la triste situación de las masas africanas en Swazilandia.

163. Dijo que el NNLC era una organización para la liberación del pueblo africano de Swazilandia, cuya política y cuyos programas consistían principalmente en trabajar sin cesar por la independencia inmediata del pueblo de Swazilandia y por la completa emancipación del pueblo swazi de la esclavitud política, social y económica, así como luchar para poner fin a la dominación blanca y hacer efectivo el derecho de libre determinación.

164. El NNLC y el pueblo africano de Swazilandia afirmaban que el imperialismo y los colonialistas fascistas de Sudáfrica se habían conjurado para mantener perpetuamente a Swazilandia en la condición de colonia. Podía citarse como ejemplo el hecho de que el Comité Constitucional de Swazilandia que preparó las últimas propuestas para la evolución constitucional fuera designado por un funcionario colonial, el Alto Comisionado de Su Majestad, que también lo presidió. El Comité incluía otros dos miembros de la administración colonial: el Secretario Principal y el Procurador General. Los miembros restantes fueron elegidos entre los que se llamaban a sí mismos tradicionalistas, el Imbokodvo National Movement, miembros todos del Swazi National Council y consejeros del Rey, y entre los adherentes a la United Swaziland Association, un partido político blanco y racista que no aceptaba miembros de otras razas.

165. Entre sus recomendaciones el Comité Constitucional de Swazilandia presentó las siguientes propuestas antidemocráticas: a) que Swazilandia fuera dividida en ocho distritos electorales, cada uno de los cuales elegiría tres miembros para la Cámara de Dipu-

tados (párrafo 37 de su informe); b) que el Rey designara seis miembros para la Cámara de Diputados (párrafo 27); seis miembros del Senado serían también designados por el Rey y seis elegidos por la Cámara de Diputados (párrafo 32), y c) que los derechos sobre la tierra fueran investidos en el Ngwenyama (Rey) en nombre de la nación swazi y que el Rey conservara el derecho a hacer concesiones, arrendamientos y a adoptar otras disposiciones con respecto a los minerales y minerales de petróleo que se confiaran a su cuidado (párrafos 68 y 69).

166. El NNLC y el pueblo de Swazilandia estaban firmemente convencidos de que si esas propuestas eran aceptadas por el Gobierno del Reino Unido como base para la concesión del gobierno propio a Swazilandia, sólo servirían los intereses de los colonos blancos y sus jefes imperialistas. Si el Imbokodvo Party y la United Swaziland Association tenían el principio democrático de un representante para el Parlamento elegido por cada distrito electoral era porque sabían que serían irremediablemente derrotados; y el NNLC insistía en que se adoptara el sistema que se seguía en toda el Africa en las antiguas colonias británicas y en la propia Gran Bretaña, o sea, por cada distrito electoral, un miembro elegido a base de un voto por hombre. El NNLC afirmaba también que así como la Reina de Inglaterra no tenía derecho a llenar la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores con personas designadas por ella, el Rey de Swazilandia no tenía derecho a llenar ambas cámaras del Parlamento de Swazilandia con personas nombradas por él, que representarían alrededor de una tercera parte del total en una reunión conjunta de ambas cámaras.

167. El NNLC y el pueblo de Swazilandia comprendían que sólo los colonos y sus jefes imperialistas saldrían ganando si el derecho sobre las tierras fuese investido en el Rey, cuyas relaciones con la United Swaziland Association, que se inclinaba hacia el apartheid, eran muy equívocas. El NNLC tenía en su poder copias de la correspondencia cambiada entre el Sr. C. F. Todd, Presidente de los miembros electos del European Advisory Council de Swazilandia y el Rey, y estaba dispuesto a distribuir estas cartas si así se lo solicitaba. También tenía otra documentación sobre el Sr. Todd y sus actividades en favor del apartheid en Sudáfrica.

168. El pueblo de Swazilandia mantenía que la lucha por la emancipación giraba alrededor de la tierra, la cual, lo mismo que los minerales, debería ser de propiedad colectiva como en el pasado, cuando las tierras pertenecían al pueblo y el gobierno elegido por éste actuaba como administrador.

169. El Imbokodvo había demostrado hasta la fecha que era un instrumento de los colonos, los cuales a su vez eran agentes del imperialismo mundial. Si sus maquinaciones llegaran a tener éxito, Swazilandia se convertiría en un estado neocolonial y desaparecería la actual tranquilidad entre las razas junto con los derechos de los pueblos africanos.

170. El NNLC, al darse cuenta de que el informe de 1966 del Comité Constitucional de Swazilandia proponía una pseudo independencia, o sea una independencia con ataduras, pidió al Gobierno del Reino Unido que convocara una conferencia constitucional debidamente representativa en la que se reconocieran y protegieran los derechos e intereses a largo plazo del pueblo africano de Swazilandia. El Sr. Zwane apeló a las Naciones Unidas para que hicieran presión sobre el Reino

Unido y subrayaran la importancia de reunir esa conferencia a fin de facilitar la transición pacífica a la independencia.

171. No se podía considerar al Imbokodvo como representante del pueblo africano porque evidentemente era un títere al servicio de intereses ajenos a los del pueblo swazi. Willie Meyer, jefe de la United Swaziland Association que sólo admitía miembros blancos, había dicho al *Rand Daily Mail*, un periódico de Johannesburgo, que su partido había ayudado realmente a poner en pie al Imbokodvo y que, al tratar éste recientemente de proceder con cierta independencia política, Meyer había dicho que parecía que el hijo quería emanciparse, y había agregado: "Quiero una representación parlamentaria del 50% para los blancos durante los próximos cinco a diez años. No aceptaré nada menos". Tal era el aliado de la organización que pretendía representar al pueblo swazi.

172. El NNLC también quería señalar a la atención del Comité Especial los sufrimientos infligidos a los miembros del partido y a otros swazis por el régimen Verwoerd, que recurría a métodos desesperados para perjudicar los intereses del pueblo e imponer restricciones como negar visas de tránsito a los nacionalistas africanos de Swazilandia que deseaban viajar a otras partes del mundo. El Secretario General interino del NNLC no había podido obtener ese visado el año pasado, y el Presidente del partido, Sr. Ambrose Zwane, fue arrestado en Sudáfrica y acusado falsamente de haber entrado ilegalmente al país. Un número considerable de africanos de Swazilandia trabajaban en las minas de oro de Sudáfrica, donde se les negaba el derecho elemental a formar sindicatos y realizar negociaciones colectivas. El NNLC no podía abandonar a esos trabajadores sin abandonar al propio tiempo la razón misma de su existencia.

173. En vista de esa situación, el NNLC pedía al Comité Especial que ayudara al pueblo de Ngwane a obtener inmediatamente la independencia; que ayudara a las fuerzas del nacionalismo africano a proteger los intereses vitales del pueblo africano de Swazilandia; que impidiera a la administración del Sr. Verwoerd y a su partido nacionalista intervenir en los asuntos de Swazilandia; que impidiera a esa administración explotar en ninguna forma la condición de país sin litoral marítimo de Swazilandia y que obligara al Gobierno del Reino Unido a conceder una verdadera constitución sin carácter racial a Swazilandia.

174. Respondiendo a unas preguntas, el Sr. Zwane dijo que cuando preguntó a un miembro del Imbokodvo en el Consejo Legislativo por qué trabajaba con Sudáfrica, este último le advirtió que debía tener más cuidado pues era peligroso hacer esas preguntas. En una ocasión en que los miembros del NNLC estaban pintando "slogans" pidiendo mayores salarios para los trabajadores, las fuerzas de seguridad sudafricanas les impidieron hacerlo y les amenazaron con arrestarlos. Recordó el caso de una refugiada sudafricana. La señora Wentzel, que fue llevada por las fuerzas de seguridad sudafricanas; sin embargo, las autoridades negaban su presencia. La policía sudafricana enviaba taquígrafos a tomar notas en las reuniones del NNLC y los hombres a cargo de los servicios de seguridad de esa fuerza estaban autorizados para detener a la gente y deportarla a Mozambique. Todos los habitantes de origen sudafricano, o sea unas 8.000 personas, tenían doble nacionalidad. A pesar de todo eso, el Secretario

de Estado para las Colonias negó en Londres que hubiera un entendimiento con la policía sudafricana. El NNLC pidió que se realizara una investigación, pero nada se hizo al respecto. Durante las elecciones para el Consejo Legislativo, el Gobierno sudafricano envió a un miembro del Parlamento a fiscalizar el Imbokodvo. El NNLC protestó ante la administración británica pero su protesta no tuvo consecuencias.

175. Añadió que como el Gobierno del Reino Unido no había accedido a la petición del NNLC de que se celebrara una conferencia constitucional, pedía al Comité Especial que hiciese presión sobre dicho Gobierno para que la convocara. Pedía también a las Naciones Unidas que enviasen observadores a Swazilandia cuando se celebraran las elecciones. Convino en que si Basutolandia y Bechuania obtenían una auténtica independencia, ello influiría favorablemente en la situación de Swazilandia.

176. Apuntó que el 45% de las tierras del Territorio estaba ocupado por los africanos y el 55% por europeos. El Swazi National Council instituyó un programa para volver a comprar a los colonos la tierra que les había distribuido el Jefe Supremo. El país producía amianto, oro, mineral de hierro, azúcar y pulpa de madera. Casi todos esos productos se elaboraban en el exterior, y esa práctica tenía por objeto impedir que los africanos aprendieran a hacer esos trabajos.

Declaraciones generales de los miembros

177. La representante de los Estados Unidos de América señaló que los Estados Unidos estaban completamente de acuerdo con lo que consideraban los objetivos políticos fundamentales de los pueblos de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia: el derecho del pueblo a expresar libremente sus deseos y a gobernarse a sí mismo.

178. Como manifestó al comienzo de las reuniones en Dar es Salaam, la finalidad del Comité Especial debía ser examinar objetivamente los complejos problemas que se le presentaban. Le parecía que algunas de las declaraciones que se habían oído podían ser resultado de una tendencia a la generalización apresurada y a atribuir culpas por asociación. Por ejemplo, un ciudadano de los Estados Unidos, el General Norstad, expresó hace algún tiempo, a título personal, una opinión a la que se había referido uno de los peticionarios. Esa opinión había sido citada ya extensamente durante la última visita del Comité Especial a Africa. Como declaró entonces el representante de los Estados Unidos, el Sr. Norstad era un particular y tenía derecho a expresar su propia opinión, la cual no debía en modo alguno considerarse como opinión del Gobierno de los Estados Unidos. Dicho Gobierno aplicaba estrictamente las medidas que prohibían vender armas y equipo militar a Sudáfrica, de conformidad con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en diciembre de 1963, así como exportar a dicho país maquinarias o material destinado a su fabricación.

179. El Gobierno de los Estados Unidos no ignoraba la relación entre los Territorios y Sudáfrica y comprendía perfectamente los efectos de la aborrecible política de apartheid del Gobierno sudafricano en esos Territorios. Siempre había condenado la política racista, brutal e inhumana practicada en Sudáfrica y los efectos de esa política en los países vecinos. Pero la población de esos Territorios dirigiría pronto sus propios destinos

a pesar de las limitaciones geográficas y económicas. Bechuania obtendría la independencia el 30 de septiembre de 1966 y Basutolandia seguiría poco después; cabía esperar que Swazilandia también se independizara en breve. Como gobiernos basados en el sufragio universal de los adultos y la igualdad racial, los de los tres Territorios representarían un claro contraste con las políticas racistas de Sudáfrica y tal vez fueran una nueva demostración de que los grupos raciales diferentes podían vivir en armonía siempre que los hombres y mujeres fueran tratados con igualdad y justicia. El Gobierno de los Estados Unidos se regocijaba de antemano de esos acontecimientos políticos.

180. Dijo que los Estados Unidos habían ofrecido un programa de asistencia a los Territorios en forma de becas y subsidios y esperaban contribuir a la formación de los futuros elementos dirigentes. Durante los dos últimos años habían concedido 100.000 dólares anuales a la Universidad de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. Además, en las universidades y escuelas de los Estados Unidos había 25 estudiantes de los Territorios que hacían uso de becas que cubrían todos sus gastos. Otros 17 habían recibido becas parciales para estudiar en universidades norteamericanas. El Gobierno también había proporcionado fondos para crear una cátedra en la Universidad. Finalmente, desde mediados de 1965 los Estados Unidos habían dado a Bechuania, por conducto del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, más de 2 millones de dólares en alimentos para contribuir a aliviar la situación de hambre causada por la sequía.

181. Sin embargo, dichos Territorios se planteaban aún problemas graves. No debía disminuirse la importancia de las dificultades económicas, y el Gobierno de los Estados Unidos esperaba poder seguir ayudando al pueblo de los Territorios a superar esas dificultades.

182. El representante de la República Unida de Tanzania declaró que las amenazas de agresión ante las que se encontraban los Territorios de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia podrían significar la continuación del colonialismo, y requerían una acción decisiva del Comité Especial. Por su situación geográfica, esos Territorios estaban a merced del régimen sudafricano de apartheid y, lo que era peor, seguían oprimidos por la colaboración entre el Gobierno de Sudáfrica y la Potencia Administradora, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, seis años después de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV)). Durante las reuniones en Dar es Salaam los peticionarios dieron al Comité Especial pruebas concretas de que la policía de Sudáfrica, con conocimiento de la Potencia Administradora, realizaba incursiones diarias en esos Territorios para intimidar a los nacionalistas que se oponían, a justo título, al saqueo y la explotación.

183. Aunque había habido algún progreso constitucional, no existía todavía un sistema adecuado que permitiera a esos pueblos fundar libremente su propio gobierno. Se necesitaba algún tipo de organismo supervisor en los tres Territorios que velara por la aplicación fiel de las disposiciones de la resolución 1514 (XV). Esa medida resultaba aún más necesaria por la grave situación creada por la rebelión de los grupos minoritarios racistas de Rhodesia del Sur. Los africanos sabían que si continuaba la explotación de los recursos de esos países por compañías extranjeras, principalmente sudafricanas, las fuerzas coloniales podían volver

a servirse de los desprestigiados *indabas*. En el documento de trabajo se señalaba (véase el párrafo 87 *supra*) que la Potencia Administradora había concedido a las empresas Engelbrecht y G. van der Brink el derecho a explotar minas de diamantes en Bechuania, en una zona que abarcaba unas 4.460 millas cuadradas.

184. La tierra, como principal medio de producción y subsistencia del pueblo africano, tenía primordial importancia. A pesar de que por su resolución 2063 (XX) la Asamblea General había pedido que el Reino Unido adoptara medidas inmediatas para restituir a los habitantes autóctonos todas las tierras que les habían sido arrebatadas, los peticionantes informaron al Comité en Dar es Salaam que dicho pueblo seguía despojado de su propiedad natural. Swazilandia era un ejemplo típico donde los colonos blancos, o sea menos del 4% de la población, controlaban más del 55% de las tierras laborables. Estas formas de explotación obligaban a los africanos a transformarse en trabajadores esclavos en las minas de oro y diamantes del régimen de apartheid de Sudáfrica.

185. La República Unida de Tanzania, convencida de que la libertad era indivisible, apoyaba las propuestas relativas a la adopción de medidas para proteger la integridad territorial y el desarrollo económico de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. Su inquietud aumentaba a medida que se intensificaban las amenazas agresivas del régimen de Sudáfrica. Como caso alarmante cabía citar el envío de maíz por Sudáfrica a ciertos miembros de un partido político de Basutolandia con objeto de influir en las elecciones en dicho Territorio, y el secuestro de varios candidatos. Ante tales pruebas las Naciones Unidas tenían la obligación de ver que las elecciones fueran libres de toda manipulación o intimidación.

186. El representante de Etiopía manifestó que la integridad territorial y la futura independencia política y económica de los tres Territorios estaban en peligro por su posición geográfica. Bechuania estaba encerrada por tres lados por Africa Sudoccidental, Sudáfrica y Rhodesia del Sur; Swazilandia se encontraba entre los Territorios controlados por los portugueses y Sudáfrica; y Basutolandia estaba en una posición aún más peligrosa, pues estaba completamente cercada por territorios donde se aplicaba la política de apartheid. Esta amenaza evidente había llevado a la Asamblea General a aprobar la resolución 2063 (XX) de 16 de diciembre de 1965, el párrafo 2 de cuya parte dispositiva reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia a la libertad y la independencia. Según se afirmaba, a fines de septiembre de 1965 Verwoerd había dicho que la proximidad de los tres Territorios les daba a éstos gran importancia para Sudáfrica. Librada a sí misma, Sudáfrica juzgaría sin duda que todo el continente tenía importancia para ella por la misma razón. Botha, el Subsecretario de Administración y Desarrollo de Sudáfrica, habría subordinado la restitución a los africanos de las tierras actuales ocupadas por europeos a la posibilidad de que Sudáfrica participara en la futura orientación política y económica de los Territorios. Bastaba pensar un minuto en la mísera situación del Africa Sudoccidental para comprender cómo cumpliría esas responsabilidades el Gobierno sudafricano. Añadió que varios acuerdos económicos habían sido concertados en octubre de 1965 entre Sudáfrica y Portugal, y en noviembre del mismo año entre Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

187. Los hombres políticos europeos de los Territorios estaban haciendo todo lo posible para ponerlos en tal posición de dependencia económica con respecto a Sudáfrica, que la dominación política de ese país fuera inevitable. La Sra. Eirene White, Subsecretaria de Estado para las Colonias del Reino Unido, había señalado en julio de 1965 la penosa escasez de establecimientos de educación en los Territorios. Eran tan inadecuados que para sus servicios profesionales y técnicos los Territorios dependían de expatriados de la República de Sudáfrica. Uno de los principales factores que dificultaban el desarrollo industrial era la falta de personal calificado.

188. En junio de 1965 Sudáfrica había enviado cereales a Basutolandia por valor de 165.000 libras esterlinas para aliviar el hambre. Podría preguntarse por qué no fue la Potencia Administradora la que ayudó a los habitantes del Territorio. El partido opositor había presentado una moción pidiendo a la Asamblea de Basutolandia que rechazara la donación. Aunque el Territorio estaba bajo la llamada protección del Gobierno del Reino Unido, los estudiantes que regresaban del extranjero a su hogar habían tenido que quedarse en Londres por no poder obtener visado de tránsito sudafricano. El Gobierno de Sudáfrica también se había arrogado la facultad de censurar las comunicaciones destinadas a los Territorios.

189. El orador se declaró profundamente inquieto ante la gran dependencia económica de los Territorios con respecto a Sudáfrica. El pilar de la economía de Bechuania era la carne vacuna, que se exportaba anualmente a Sudáfrica por valor de 5 millones de libras esterlinas.

190. Como el Gobierno racista no había hecho ningún esfuerzo por ocultar su política hacia los Territorios vecinos, correspondía a la Potencia Administradora asegurarse de que la concesión de la independencia no significase que los viejos colonialistas entregaban los Territorios a un nuevo y despiadado imperialismo. Era esencial que las Naciones Unidas enviaran representantes para impedir que Sudáfrica volviera a desafiar las recomendaciones de las Naciones Unidas y les presentara un hecho consumado.

191. Ninguno de esos Territorios se bastaba a sí mismo económicamente. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales habían tratado de aliviar la miseria humana, pero quedaba mucho por hacer.

192. El representante de Dinamarca señaló que en Basutolandia y Bechuania los Gobiernos estaban decididos a obtener la independencia sin más demora, mientras los partidos de oposición querían que se hicieran primero ciertos cambios. Algunas delegaciones temían que la independencia no fuera genuina y la delegación de Dinamarca estaba completamente de acuerdo en que era muy importante asegurarse de que la independencia fuera real y estuviera libre de toda injerencia extranjera. El orador subrayó, sin embargo, que la independencia misma era lo principal en las cuestiones coloniales, y que esa idea estaba precisamente expresada en el párrafo 3 de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que afirmaba que la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo nunca debía servir de pretexto para retrasar la independencia. Estaba convencido de que una vez que hubieran obtenido su independencia, los

Territorios serían capaces, como los demás países africanos libres, de ocuparse en sus problemas internos.

193. La situación era algo distinta en Swazilandia, donde el progreso hacia la independencia había sido menos rápido. Se habían tomado disposiciones para empezar a establecer la autonomía en 1966, pero no se esperaba que el Territorio llegase a ser completamente independiente antes de 1970. La delegación danesa había observado que se estaba haciendo mucha presión para que se concediese la independencia antes de esa fecha a base de una constitución más democrática que la que se había redactado.

194. A su juicio la difícil situación en que se encontrarían los tres Territorios frente a Sudáfrica, a causa de su posición geográfica, ensombrecía el porvenir. Era sumamente importante, pues, hacerlos económicamente viables para que pudieran resistir la presión de ese país. El Gobierno del Reino Unido les estaba prestando amplia asistencia económica, y podía esperarse que continuaría haciéndolo después de la independencia. Las Naciones Unidas habían decidido crear un fondo para su desarrollo económico y el Gobierno de Dinamarca había prometido contribuir cuando fuese probable que el fondo adquiriría un volumen suficiente. Un número muy grande de Estados Miembros había subrayado la necesidad de prestar asistencia en gran escala, y era una desilusión para la delegación de Dinamarca que hasta el momento sólo tres países habían prometido contribuciones.

195. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité Especial se habían ocupado en diversas oportunidades en la situación existente en Basutolandia, Bechuania y Swazilandia y en las medidas que el Reino Unido debería haber tomado para asegurar a los pueblos de esos Territorios una libertad y una independencia verdaderas basadas en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La Asamblea General de las Naciones Unidas había recomendado que se organizaran elecciones democráticas con ese fin. Pero la evolución constitucional de esos Territorios mostraba claramente que, velando por los intereses del capital británico en Sudáfrica, que representan más de mil millones de libras esterlinas, el Reino Unido había hecho todo lo posible por frenar la organización de esas elecciones. Como se decía en un artículo aparecido en un periódico africano: "Las últimas elecciones demostraron que han triunfado los métodos de presión económica, las intrigas y la corrupción".

196. El 29 de abril de 1965 se habían celebrado elecciones en Basutolandia. El *Rand Daily Mail* del 20 de noviembre dijo al respecto: "El partido nacional, que obtuvo 31 de las 60 bancas, ha triunfado con Jonathan, gracias a la considerable ayuda financiera que ha recibido de la República Sudafricana y la República Federal de Alemania". Por consiguiente, a pesar de que ella misma empleaba métodos inconfesables, y fomentaba además su empleo durante las elecciones, la Potencia Administradora sólo había podido garantizar una mayoría insignificante al partido que apoyaba.

197. La evolución constitucional de Swazilandia se desarrollaba en la misma atmósfera antidemocrática. El Reino Unido había establecido una comisión para revisar la constitución antes de la proclamación de la

independencia del Protectorado. Varios partidos políticos no tenían acceso a ella; pero los europeos que se declaraban abiertamente hostiles al principio de "un voto por persona" desempeñaban en ella un papel preponderante. A la luz de estos hechos, se comprendía por qué los peticionantes oídos por el Comité Especial habían solicitado que todos los partidos políticos estuvieran representados en la comisión constitucional, que se organizaran elecciones sobre la base del sufragio universal y que las elecciones se realizaran bajo el control de la Organización de la Unidad Africana (OUA).

198. Sería vano, pues, negar que la Potencia Administradora no había hecho ningún caso de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que perpetuaba la situación existente en lugar de preparar para la independencia a la población de sus protectorados. Los tres territorios que administraba dependían económicamente de la República Sudafricana y eran víctimas de la actividad nefasta de los monopolios extranjeros. Se podía citar otro ejemplo del poco caso que hacía el Reino Unido de las decisiones de la Asamblea General. La Asamblea había recomendado a la Potencia Administradora que tomara medidas para restituir a la población las tierras de que se la había despojado. Ya habían transcurrido cuatro años desde que la Asamblea General adoptó esa decisión, pero la situación no había cambiado: en Bechuania, el 62% de las tierras pertenecía a la Corona británica y a los europeos, y en Swazilandia la población blanca poseía más del 50% de las tierras. Como consecuencia de la política practicada por la Potencia Administradora, la situación económica de los tres Protectorados hacía imposible mejorar el nivel de vida de su población y crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico de sus territorios una vez obtenida la independencia.

199. La delegación de la Unión Soviética estimaba que el Comité Especial debía pedir a la Potencia Administradora que aplicara las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la evolución constitucional de los Protectorados, a fin de asegurar una representación democrática de la población basada en el sufragio universal y el principio de "un voto por persona". El Comité debía recomendar igualmente que la Potencia Administradora retirara inmediatamente sus tropas del territorio de los protectorados, pues su presencia impedía organizar elecciones verdaderamente democráticas. Finalmente, el Comité debía pronunciarse a favor de una resolución tendiente a restituir a la población autóctona las tierras que le pertenecían.

200. Además, con respecto al fondo previsto por la resolución 2063 (XX) de la Asamblea General, el representante de la Unión Soviética estimaba que, teniendo en cuenta las características de la administración colonial y la actividad de los monopolios extranjeros, no era probable que dicho fondo favoreciera en alguna forma el logro de la independencia económica a los tres Territorios. Sólo la independencia política basada en elecciones democráticas, la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios y la redistribución de los medios de producción al pueblo podían crear condiciones favorables para la independencia económica de los tres Territorios.

201. El representante de la India indicó que había escuchado con la mayor atención todas las opiniones ex-

puestos sobre la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, y estaba de acuerdo en que si el Reino Unido hubiera estado representado en la reunión la cuestión de las tierras se habría podido aclarar ahí mismo. Sería injusto criticar al Gobierno del Reino Unido en ausencia de su delegación, pero era esencial crear condiciones adecuadas para lograr y mantener la independencia y el desarrollo de los tres Territorios. Aunque quedaban por resolver problemas constitucionales y de otro carácter, las elecciones no debían demorarse. Cabía lamentar que no se hubiera hecho nada por Swazilandia a este respecto; si la Potencia Administradora no hacía algo el Comité Especial debía adoptar medidas rápidamente.

202. Mientras los tres Territorios siguieran sometidos a la presión de sus vecinos, su sistema de vida sería semejante al de Rhodesia del Sur y Sudáfrica: la supremacía de una minoría blanca y la explotación de la población africana. Aunque la independencia estaba cercana, el Comité Especial y las demás organizaciones debían continuar sus esfuerzos por poner fin a la dominación blanca, problema que continuaría en pie mientras no cambiaran las políticas de Portugal, Rhodesia del Sur y Sudáfrica.

203. La delegación de la India estaba desilusionada al ver que tan pocos miembros del Comité parecían dispuestos a contribuir al Fondo de Desarrollo Económico. Sólo dos de ellos, Chipre y Liberia, habían anunciado sus contribuciones; Dinamarca había indicado su intención de contribuir cuando el Fondo adquiriese un volumen que le permita funcionar. Vista la importancia del Fondo, puesta de relieve en el excelente informe de la Comisión Chacko, la delegación de la India había decidido prometer una contribución apropiada, que se haría efectiva cuando el Fondo estuviese en condiciones de funcionar. Esperaba que otros miembros dieran generoso apoyo a esta medida, que había de garantizar la integridad territorial de los Territorios al hacerlos menos dependientes económicamente de los Estados vecinos.

204. El representante de Polonia apuntó que su delegación apoyaba la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y deseaba que los tres Territorios lograsen su independencia a base del gobierno de la mayoría. Polonia no ignoraba las maniobras de la Potencia Administradora y Sudáfrica; y los peticionarios habían citado muchos casos demostrativos de injerencia en las elecciones. Era evidente que el Reino Unido trataría de seguir ejerciendo su control tras la máscara de la independencia.

205. La Potencia Administradora había hecho muy poco pues partía del supuesto de que el destino de los tres Territorios sería su incorporación a Sudáfrica, como lo indicaba el hecho de que dependieran de la Oficina de Relaciones con el Commonwealth, que trataba con Sudáfrica. El Reino Unido había descuidado, pues, su obligación de conceder la independencia en las mejores condiciones posibles. Ello había hecho que los tres Territorios dependieran cada día más de Sudáfrica, y, en realidad, estuvieran en una situación de servidumbre económica. Todos los puestos importantes de la administración pública estaban desempeñados por blancos y, sobre todo, por sudafricanos. En particular, la Potencia Administradora no había cumplido las resoluciones de la Asamblea General en las que se exhortaba al Reino Unido a restituir todas las tierras a sus legítimos propietarios autóctonos.

206. El representante de Australia dijo que la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, a la que el Comité Especial había prestado a menudo muy seria atención, adquiriría aún mayor importancia porque dentro de cuatro meses Bechuania se convertiría en la República independiente de Botswana, y porque se estaban celebrando nuevas conversaciones entre la Potencia Administradora y la delegación de Basutolandia sobre el momento en que el Territorio adquiriría la independencia, con el nombre de Lesuto, en virtud de las decisiones de su Parlamento de elección popular. Tanto Bechuania como Basutolandia tenían sus propios gobiernos, elegidos por sufragio universal pleno, o sea, un voto por persona, al paso que Swazilandia iba progresando hacia la independencia soberana.

207. Añadió que su delegación había votado a favor de las resoluciones que sobre esos Territorios fueron aprobadas en 1965 por el Comité Especial y luego por la Asamblea General, y había observado con agrado los esfuerzos desplegados para que los Territorios alcanzasen la independencia; por ser inminente la de dos de ellos, era hora que el Comité hiciera una nueva evaluación de las realidades de la situación social, política y económica de esos países. Recordó la declaración del representante de Australia formulada en la 1549a. sesión de la Cuarta Comisión el 8 de noviembre de 1965: "... la experiencia nos obliga a proceder con cautela cuando se trata de crear fondos especiales y separados para fines especiales en determinadas esferas especiales... (lo cual) "...tiene evidentes desventajas en una era de polifacéticas empresas de desarrollo realizadas a través de organizaciones como las Naciones Unidas. Además, no es fácil decir, en un mundo acosado por tantos problemas y marcado por la miseria en mil formas ..., que a una pequeña parte de un determinado grupo de gente haya de concedérsele preferencia de cualquier índole con fines de socorro y desarrollo. No obstante, mi delegación aprecia muy sinceramente los motivos humanitarios en que se fundan las propuestas que hoy se nos presentan".

208. En relación con el asunto de la evolución constitucional, el orador citó la declaración hecha al Comité Especial por el Embajador de Australia el 2 de noviembre de 1964:

"Por lo que atañe al problema del desarrollo constitucional, mi delegación desea hacer constar que, teniendo presentes las duras realidades de la situación, nos parece que la Autoridad Administradora viene desempeñando con sensatez sus obligaciones ... El desarrollo constitucional ... no es problema sencillo ... todos nos percatamos de los problemas que ha tenido que afrontar el Gobierno británico, en calidad de Autoridad Administradora. Intenta abrir camino pacíficamente mediante la conciliación de intereses; mi delegación lo considera meritorio. Creo que ya empiezan a verse los resultados."

209. Reiteró que su delegación rechazaba el apartheid y la aplicación de este sistema en la República de Sudáfrica. Para impedir que su influencia se propagase a otros países, éstos necesitaban que las Naciones Unidas los ayudara a reforzar su estructura interna. Sin embargo, no se podían pasar por alto los hechos incluíbles de su situación geográfica. Como Basutolandia era un enclave en Sudáfrica, su existencia entera estaba vinculada a Sudáfrica, y sus recursos eran tan reducidos que buena parte de su población no podría vivir si no trabajaba en Sudáfrica.

210. La economía de Bechuania dependía de las de Sudáfrica y Rhodesia del Sur en puntos importantísimos. Su único ferrocarril se administraba desde esos países, sin cuyo comercio y asistencia no podría seguir funcionando. Tampoco Swazilandia — aunque más fuerte en lo económico — tenía salida al mar.

211. El problema fundamental que afrontaban las Naciones Unidas era el de cómo expresar de un modo realista su deseo de ayudar a establecer relaciones entre Estados soberanos independientes. Todo estudio del problema debía empezar por la firme base de un precedente bien sentado. Este asunto había sido objeto recientemente de codificación en una importante conferencia, a la que se asociaron las Naciones Unidas. Tales normas de larga vigencia podrían dar ciertos derechos a un Estado sin litoral, y a sus vecinos; derechos que, si habían de ejercerse plenamente, tenían que depender de la moderación y el respeto mutuos hacia la independencia e integridad ajenas.

212. El representante de Bulgaria comprobó que la situación de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia no había variado. Los peticionarios habían demostrado que la población de esos tres Territorios sufría mucho por la persistencia del odioso apartheid; su situación apenas difería de la de sus hermanos de Sudáfrica y del África Sudoccidental. La culpa era, sin duda, del Reino Unido, que había dado carta blanca al régimen racista de Sudáfrica. Los campesinos habían sido despojados de sus tierras y los obreros trabajaban en durísimas condiciones. También en ese caso los grandes monopolios internacionales eran cómplices de una vergonzosa explotación. Los nombres citados por los peticionarios tenían resonancias tristemente conocidas de los miembros del Comité Especial: Rockefeller, el Chase Manhattan Bank y el First National City Bank de Nueva York salían a relucir a menudo, en cuanto se trataba de Sudáfrica o de los tres Protectorados.

213. Afirmó luego que la verdadera independencia se obtenía en el plano político. Había que organizar elecciones libres en aquellos Territorios.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

214. En la 437a. sesión el representante de la República Unida de Tanzania presentó un proyecto de resolución sobre los tres Territorios (A/AC.109/L.303), patrocinado por el Afganistán, la Costa de Marfil, Etiopía, la India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia.

215. Señaló que en los párrafos 4 y 6 se introducía un elemento nuevo: la necesidad de una asistencia de las Naciones Unidas para velar por el progreso hacia la independencia en cada uno de los tres Territorios. Recordando que se estaba celebrando en Londres una conferencia constitucional sobre Basutolandia, dijo que esperaba que pudieran celebrarse elecciones libres antes de la independencia bajo la supervisión de un representante de las Naciones Unidas.

216. Con respecto al párrafo 3, dijo que se recordaría que en el párrafo 5 de la resolución 2063 (XX) de la Asamblea General se pedía al Comité que, en colaboración con el Secretario General, estudiara las medidas necesarias para asegurar la integridad territorial y la soberanía de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, y que presentara un informe a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

217. El párrafo 2 trataba de la importante cuestión de las tierras a la que ya se había hecho referencia.

218. En nombre de los autores del proyecto aseguró al Comité que su contenido reflejaba la profunda inquietud de sus autores, y que éstos celebrarían recibir no sólo el apoyo total del Comité sino también cualesquier modificaciones o adiciones que pudieran dar mayor fuerza al texto.

219. El representante de Sierra Leona declaró que las tres causas principales de inquietud que reflejaba el proyecto de resolución (A/AC.109/L.303) eran, en primer lugar, la cuestión de la distribución de las tierras, que debía subrayarse más enérgicamente que en la resolución 1514 (XV); en segundo lugar, el problema que representaba para esos Territorios sin litoral el transporte en tránsito en ambos sentidos; y en tercer lugar, las condiciones sociales y económicas desfavorables en que se hallaban los tres Territorios.

220. Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva reflejaban la inquietud de los autores por las condiciones en que se otorgaría la independencia; los párrafos 3 y 6 su ansiedad por la influencia, interferencia y ambiciones de Sudáfrica; y los párrafos 4, 5 y 6 su preocupación por la triste situación social y económica de esos Territorios.

221. El representante de Dinamarca manifestó, con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que el Comité Especial no disponía de toda la información necesaria para poder dar una opinión sobre el problema de las tierras. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, él consideraba que debería hacerse referencia a la colaboración entre el Comité Especial y el Secretario General prevista en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 2063 (XX). Pero no insistiría en esos puntos y estaría dispuesto a apoyar el proyecto de resolución según fuera presentado.

222. El representante de Polonia subrayó la importancia de que las elecciones fueran verdaderamente democráticas, en lo cual se inspiraba el párrafo 2 de la parte dispositiva. Añadió que su delegación acogía con agrado el párrafo 3, y conocedora de la amenaza de expansión sudafricana, apoyaba la idea contenida en el párrafo 4.

223. Estaba firmemente convencido de que la representación de los tres Territorios en las Naciones Unidas serviría para establecer vínculos permanentes y permitiría a las Naciones Unidas vigilar de cerca la situación política. Sólo gozando de una independencia auténtica podrían los Territorios corregir los efectos acumulados del abandono en que los había tenido el Reino Unido, y desenvolverse solos política y económicamente. La delegación de Polonia votaría pues a favor del proyecto de resolución.

224. El representante de Australia dijo que los párrafos cuarto y sexto del preámbulo no reflejaban fielmente los hechos. El párrafo 3 de la parte dispositiva no podría aplicarse sin invertir la tendencia hacia la independencia de Basutolandia y Bechuania, respecto de la cual la Potencia Administradora había entregado sus poderes a los Parlamentos de esos países. Estos cuerpos legislativos podrían tomar por sí mismos cualesquier medidas necesarias para la devolución de tierras de propiedad de europeos, con sujeción a las necesidades del desarrollo económico.

225. El párrafo 4 de la parte dispositiva reflejaba la necesidad de que se comprendieran con hondura y simpatía los problemas que plantearía la independencia de los tres Territorios. El orador no se oponía a la creación de un subcomité para ese fin, pero compartía la inquietud de los representantes de Dinamarca e Italia sobre la posición de dicho subcomité y sobre la continuación de su labor en cualquier territorio después de la independencia. Era conveniente revisar las decisiones adoptadas en 1965 sobre la rápida terminación de esos trabajos. Sugirió que el Comité estudiara el precedente de la ayuda que la Secretaría había podido ofrecer en su misión a los Territorios en 1965.

226. Volvió a preguntar si una parte tan pequeña de un pueblo merecía la atención especial prevista en el párrafo 6 de la parte dispositiva. Declaró que aunque la delegación australiana apreciaba la finalidad de la propuesta, no podría prometer una contribución al Fondo, y apoyaría por tanto el proyecto de resolución en conjunto, pero mantendría las reservas concernientes al párrafo 5 de la parte dispositiva. También entendía que la acción prevista en el párrafo 7 de la parte dispositiva se realizaría en muy estrecha consulta con la Potencia Administradora.

227. El representante de Italia temía que llegase el día de la independencia sin que el Comité Especial hubiese adoptado una posición firme sobre el grave problema a que habían de hacer frente los tres Territorios.

228. A pesar de la desalentadora falta de resultados en el pasado, el representante de Italia apoyaba el proyecto de resolución (A/AC.109/L.303) con dos reservas: en primer lugar, el párrafo 2 reflejaba el debate del Comité Especial durante su período de sesiones de 1965, lo que significaba que no se había encontrado ninguna solución al problema de las tierras. No había ninguna razón para que los parlamentos mismos no elaboraran su propia legislación sobre ese punto. Toda acción del Comité podría considerarse como una interferencia. Recordó a ese respecto el acta resumida de la 372a. sesión, celebrada el 17 de junio de 1965 (A/AC.109/SR.372). En segundo lugar, compartía la opinión del representante de Dinamarca en cuanto a la necesidad de aclarar el significado y el alcance del párrafo 3. No estaba seguro de que el Comité debiera continuar aplicando las medidas mencionadas después de la independencia de los tres Territorios. También habría que mencionar en alguna parte de la resolución la próxima independencia de Bechuania. A este respecto sugirió agregar un nuevo párrafo en la parte dispositiva, que podría decir: "*Acoge con beneplácito* la fijación de una fecha concreta para la independencia de Bechuania." Más adelante el orador presentó oficialmente y por escrito un texto (A/AC.109/L.306) al Comité.

229. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sugirió que se insertaran las palabras "en consulta con el Comité Especial" entre las palabras "que" y "nombre".

230. El representante de la República Unida de Tanzania presentó un texto revisado del proyecto de resolución (A/AC.109/L.303/Rev.1) y dijo que se habían hecho las modificaciones pedidas por la Unión Soviética e Italia, cuya cooperación agradeció. La enmienda de Italia mejoraba el texto pues era importante conocer una fecha fija para la independencia, sea cual fuese la opinión que pudiera alguien tener de la sinceridad que ello suponía.

231. El representante de Italia dio las gracias a los patrocinadores por haber aceptado el fondo de su enmienda y añadió que no insistiría en que se votara al respecto. Sin embargo, como existía cierta imprecisión sobre si se había fijado o no recientemente la fecha de la independencia de Basutolandia, le parecía preferible indicar tan sólo el pesar del Comité Especial porque la Potencia administradora no había fijado la fecha de la independencia de Swazilandia.

232. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que su delegación había examinado seriamente la información acerca de Basutolandia contenida en el documento de trabajo (véase el párr. 53 *supra*) y había tomado nota de que, en nombre del Gobierno del Reino Unido, la Sra. Eirene White había aceptado la declaración de intenciones del Jefe Jonathan y "las seguridades por éste dadas de que era probable que las condiciones estipuladas se cumplieran". El empleo de la palabra "probable" hacía que las seguridades carecieran de valor. Añadió que había escuchado por radio el 8 de junio de 1966 que los representantes de Basutolandia se hallaban en Londres para sostener conversaciones en materia constitucional; pero que hasta el momento el Comité Especial carecía de fechas definitivas para la independencia de Basutolandia y Swazilandia. Lamentó la ausencia del representante del Reino Unido, que hubiera podido arrojar luz sobre la cuestión.

233. El representante de Italia indicó que había diferencia de opinión sobre la interpretación del párrafo citado. Señaló que el Comité Especial no sabía si se había presentado alguna solicitud entre el 29 de abril y el 8 de junio de 1966. Caba pues, la duda, pero la delegación de Italia no insistiría en la cuestión.

234. El representante de Bulgaria se felicitó también de que los autores del proyecto de resolución hubieran aceptado la sugerencia de la delegación de la Unión Soviética, según la cual se pediría al Secretario General que consultara al Comité Especial antes de nombrar a un representante especial en cada Territorio.

235. La representante de los Estados Unidos de América dijo que, aunque los Territorios tenían que afrontar innumerables dificultades, habían adelantado mucho. Añadió que su Gobierno hubiera querido que la resolución reconociese más ampliamente ese adelanto. También tenía otra objeción importante, o sea la exhortación a contribuir a un fondo voluntario. Cuando se creó ese fondo, su Gobierno declaró que creía preferible encauzar la ayuda mediante los programas multilaterales existentes, salvo en circunstancias especiales. Sin embargo, esto no significaba que los Estados Unidos quisieran desalentar a otros países de contribuir. Señaló una vez más la ayuda que su país daba a los territorios y a la cual se había hecho ya referencia. Expresó asimismo reservas respecto al requisito de que los representantes especiales de las Naciones Unidas fueran nombrados en consulta con el Comité Especial y dijo que su delegación preferiría dejar este asunto a discreción del Secretario General. Por último, recalco que su Gobierno compartía la preocupación manifestada en la resolución por el futuro desarrollo político y económico de los Territorios, abrumados como estaban por los problemas que les creaba su proximidad a Sudáfrica.

236. En la 439a. sesión quedó aprobado el proyecto de resolución (A/AC.109/L.303/Rev.1) por 20 votos contra ninguno y 1 abstención. El representante de Chi-

le declaró que lamentaba no haber podido, por un impedimento material, participar en la votación del proyecto de resolución. Indicó que, de no haber sido así, la delegación de Chile hubiese votado a favor del proyecto, cuyas disposiciones aprobaba enteramente y esperaba ver aplicadas punto por punto.

237. El texto de la resolución sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia (A/AC.109/178), aprobada por el Comité Especial en su 439a. sesión, el 9 de junio de 1966, dice lo siguiente:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo escuchado a los peticionarios,

"Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960,

"Recordando además las resoluciones 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, 1817 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1954 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963 y 2063 (XX) de 16 de diciembre de 1965 de la Asamblea General referentes a la situación en Basutolandia, Bechuania y Swazilandia,

"Tomando nota con preocupación de la creciente injerencia del Gobierno racista de la República de Sudáfrica en los asuntos económicos, financieros y militares de los tres Territorios, y de la ayuda que ciertos países prestan a ese Gobierno,

"Profundamente preocupado por la situación económica y social reinante en los tres Territorios, los cuales necesitan urgentemente la ayuda de las Naciones Unidas,

"Sumamente preocupado por la grave amenaza que el régimen racista de la República de Sudáfrica representa para la integridad territorial y la estabilidad económica de estos Territorios,

"Teniendo en cuenta las diversas declaraciones de la Potencia Administradora respecto de la independencia de estos Territorios,

"Considerando que la presencia de representantes especiales de las Naciones Unidas en cada uno de estos Territorios es necesaria para asistirlos en su avance hacia la independencia,

"1. Toma nota con satisfacción de la fecha de la independencia de Bechuania y lamenta que la Potencia Administradora aún no haya fijado una fecha para la independencia de los otros dos Territorios;

"2. Insta a la Potencia Administradora a que, en cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, garantice que la independencia que se otorgue a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se base en los deseos libremente expresados de todos los habitantes;

"3. Pide una vez más a la Potencia Administradora que adopte inmediatamente medidas para restituir a los habitantes autóctonos todas las tierras que les han sido arrebatadas;

"4. Decide crear un subcomité encargado de realizar estudios y de proponer las medidas necesarias para garantizar la integridad territorial y la soberanía

de los tres Territorios, como lo pidió la Asamblea General en el párrafo 5 de su resolución 2063 (XX);

"5. Pide a todos los Estados que contribuyan al Fondo creado por la Asamblea General en virtud del párrafo 7 de su resolución 2063 (XX);

"6. Estima que deberían proseguirse los esfuerzos emprendidos en virtud de los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para proporcionar ayuda económica, financiera y técnica, a fin de poner remedio a la deplorable situación económica y social de los tres Territorios;

"7. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial, nombre representantes especiales de las Naciones Unidas en cada uno de los tres Territorios, para asistirlos en su avance hacia la independencia y que informe a la Asamblea General tan pronto como sea posible;

"8. Decide mantener constantemente en estudio la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia."

238. A propuesta del Presidente, el Comité Especial, en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1956, nombró miembros del Subcomité establecido de conformidad con el párrafo 4 de la resolución a Afganistán, Bulgaria, Irán, Italia, Madagascar, Malí y Uruguay.

E. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE LOS TERRITORIOS

1. PROBLEMAS COMUNES A LOS TRES TERRITORIOS

Evolución política

239. El 28 de marzo de 1966, hablando en una reunión electoral del South African Nationalist Party en Springs, el Primer Ministro Hendrik F. Verwoerd dijo que el Reino Unido y los Estados Unidos estaban tratando de lograr influencia en los antiguos Territorios del Alto Comisionado, a través, entre otros medios, de los funcionarios por ellos designados allí para interrumpir y socavar la amistad con Sudáfrica. Manifestó que deseaba preguntar a ambos países si por una vez siquiera no les sería posible actuar prudentemente y, en lugar del caos que dejaban tras de sí en las demás partes de Africa, no permitirían evolucionar naturalmente al Africa meridional.

240. El Sr. Verwoerd añadió que Sudáfrica no deseaba incorporar esos tres Territorios ni dominarlos, sino que estaba dispuesta a concederles todo cuanto deseaba para sí misma y a convivir con ellos en buena vecindad. Anhelaba buenas relaciones económicas con ellos sin injerencia externa.

Situación económica

241. El 29 de marzo de 1966 se informó que el Gobierno sueco había asignado un total de 236.000 libras esterlinas para proyectos en Basutolandia y Bechuania. Aunque Suecia adoptaría posteriormente una decisión acerca de la forma de la ayuda, se confiaba en que participaría en proyectos tales como el de expansión del centro de capacitación agrícola de Basutolandia y el de mejoramiento de los servicios de formación de maestros en Bechuania.

242. Según informes, la acción de Suecia en el Africa meridional ha adoptado hasta la fecha principalmente la forma de asistencia a las organizaciones contrarias al

apartheid y de ayuda para la enseñanza de los refugiados de Sudáfrica y del África Sudoccidental. Actualmente, según esos mismos informes, se está concediendo mayor importancia a los programas de ayuda dentro del marco de la política sueca de neutralizar, por conducto de las Naciones Unidas, los efectos de la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica.

243. Según la información suministrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se halla en preparación el programa de asistencia técnica 1967-68 para estos tres Territorios. Los créditos aprobados para 1965-1966 ascendieron a 848.948 dólares, cifra que representa un importante aumento con respecto al anterior período bienal. Se están adoptando medidas con miras a establecer oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Basutolandia y Swazilandia, las que estarán dirigidas por Representantes Residentes adjuntos directamente responsables ante el Representante para el África Central y del Sur. Estas oficinas constituyen una adición a la ya establecida en Gaberones, Bechuania.

Situación educativa

244. A comienzos de marzo de 1966, el Director de Agricultura de Swazilandia, Sr. A. C. Venn, anunció que el complejo de capacitación agrícola de Malkerns, que incluía el ya casi terminado Colegio Superior de Agricultura, cuyo costo era de 300.000 libras esterlinas, y un centro para cursillos, sería ampliado en breve para poder dar lugar al departamento de agricultura y a otras actividades de divulgación de la Universidad de Basutolandia, Protectorado de Bechuania, y Swazilandia. El complejo, al que se dará el nuevo nombre de Colegio Superior de Agricultura y Centro Universitario de Swazilandia, tendrá capacidad para 134 estudiantes de tiempo completo y hasta 32 estudiantes de cursos breves.

245. El Sr. Venn dijo también que se ofrecerían cuatro cursos de tiempo completo, tres de ellos para la obtención del certificado oficial y el restante para estudiantes de los tres Territorios, a los que al cabo de tres años la Universidad concedería un certificado en agricultura. Los primeros cursos de dos años sobre agricultura en general, silvicultura y economía doméstica se iniciarán en junio de 1966, y el primer curso con certificado universitario en 1967.

246. Según informes, en agosto de 1966 la Universidad inauguraría probablemente un curso de derecho para estudiantes externos de dos años de duración, cuyo objetivo primordial era satisfacer las necesidades de los funcionarios públicos de los tres Territorios a quienes se exigían conocimientos jurídicos, pero no en la categoría de graduados universitarios.

2. BASUTOLANDIA

Evolución política y constitucional

Relaciones con Sudáfrica

247. Según se informó, el 11 de febrero de 1966, el Jefe Leabua Jonathan, Primer Ministro de Basutolandia y también el líder del Basutoland National Party (BNP), rechazó enérgicamente las acusaciones de la oposición de que quería hacer de su país un "Bantustán apéndice de Sudáfrica". Añadió que su Gobierno estaba en favor de un Lesuto (el nuevo nombre de Basutolan-

dia) independiente, y contemplaba un porvenir de amistosa coexistencia con Sudáfrica.

248. Al hablar en la sesión de clausura de la Conferencia anual de su partido, el 13 de marzo de 1966, el Jefe Jonathan dijo que con respecto a la cuestión del apartheid y de las relaciones con Sudáfrica la actitud y la política de su Gobierno estaban dictadas por las realidades geográficas, económicas y políticas de la posición de Basutolandia en el África meridional. Reiteró que rechazaba la política de apartheid practicada por la República de Sudáfrica, y dijo que le agradaría entrevistar al Sr. Verwoerd en Sudáfrica para agradecerle su reciente donación de cereales y el haber dado empleo a basutos, así como discutir la cuestión de la paz y de la coexistencia a base de dos Estados soberanos independientes. Finalmente expresó que su Gobierno no toleraría que ningún país diera adiestramiento subversivo a los basutos.

249. Se esperaba que en las conversaciones propuestas uno de los temas principales fuera el del plan hidroeléctrico de Ox-bow, el mayor proyecto aislado en vías de estudio en Basutolandia, cuyo desarrollo dependería de la celebración de un acuerdo para la venta de energía y agua a la República de Sudáfrica. Entre tanto, un consorcio internacional se mostró dispuesto a financiar y llevar a cabo el plan, cuyo costo se calculaba entre 12 y 30 millones de libras esterlinas, y el Commonwealth Development and Welfare Fund puso a disposición del Gobierno de Basutolandia un subsidio de 160.000 libras esterlinas para una investigación, sobre la cual ha de basarse el proyecto definitivo de la presa.

250. Se sabía que otro tema importante de discusión entre los Gobiernos de Basutolandia y Sudáfrica era el de los derechos de tránsito para los basutos. Se decía que el Sr. Verwoerd había declarado que estaría dispuesto a conceder visados de tránsito a todos los viajeros *bona fide* procedentes de Basutolandia. Se informaba también que posiblemente permitiría que los refugiados sudafricanos en Basutolandia pasaran a través del territorio de la República siempre que su Gobierno no hubiese solicitado su captura por delitos de sabotaje o por planear la subversión contra el Estado.

251. El 25 de marzo de 1966 el Sr. G. M. Kolisang, Secretario General del Basutoland Congress Party (BCP), manifestó, según informes, que no se le había permitido regresar al Territorio a través de Sudáfrica y que había sido deportado a Nairobi, principalmente por haberse negado a divulgar los planes de los países africanos contra la República y a prometer que el BCP atenuaría sus críticas sobre la política de apartheid.

252. El 18 de abril de 1966, al presentar una moción relacionada con la independencia de Lesuto en la Asamblea Nacional, el Jefe Jonathan dijo que los futuros tratados entre Sudáfrica y un Lesuto independiente debían celebrarse sin injerencia alguna del Reino Unido ni de ninguna otra tercera Potencia. Sostuvo que en el pasado el Reino Unido y Sudáfrica habían celebrado muchos tratados que obligaban a Basutolandia sin tener debidamente en cuenta los verdaderos deseos e intereses de los basutos. Con respecto a la afirmación de que la independencia acarrearía el peligro de que Lesuto fuese absorbido por el sistema de apartheid de Sudáfrica, el Jefe Jonathan dijo que ese peligro era mayor mientras Lesuto estuviese bajo dominación colonial.

253. La cuestión de las relaciones futuras con Sudáfrica fue un obstáculo significativo para el logro de

un acuerdo unánime sobre la Constitución de Basutolandia independiente en la conferencia constituyente celebrada en junio de 1966. Se confiaba en que poco después de la conferencia el Jefe Jonathan y el Sr. Verwoerd se entrevistaran para conversar sobre este asunto.

La cuestión de la independencia

254. Según lo señalara anteriormente el Comité Especial, las últimas elecciones generales se celebraron el 29 de abril de 1965 conforme a la constitución basada en el acuerdo a que se llegara en la conferencia constituyente de 1964. El acuerdo estipulaba que podían realizarse un mínimo de cambios en la constitución a los efectos de la independencia, pero que las disposiciones relacionadas con la condición y las funciones del Jefe Supremo no podían alterarse sino a solicitud del Parlamento de Basutolandia, expresada en una resolución de cada una de las cámaras. El acuerdo estipulaba también que si la población de Basutolandia, no menos de un año después de las últimas elecciones generales, pedía la independencia por una resolución de ambas cámaras del Parlamento o mediante un referéndum en caso de discrepancia entre ambas cámaras, el Gobierno del Reino Unido trataría de satisfacer sus deseos lo más pronto posible, siempre que las condiciones imperantes en Basutolandia permitieran el traspaso del poder en paz y en orden. Aunque el acuerdo fue firmado por todos los dirigentes políticos de Basutolandia que asistieron a la conferencia, varios de ellos, incluido el Jefe Leabua Jonathan del BNP y el Sr. Ntsu Mokhehle del BCP, expresaron, según se informó, severas críticas con respecto a los poderes que, en virtud de la Constitución, se reservaría el Gobierno del Reino Unido.

255. Como también lo indicara previamente el Comité Especial, en el curso de las conversaciones entre el Gobierno de Basutolandia y el del Reino Unido celebradas en noviembre y diciembre de 1965 la Sra. Eirene White, Subsecretaria Parlamentaria para las Colonias, aceptó la declaración del Primer Ministro de Basutolandia de que su Gobierno pediría la independencia inmediatamente después del 29 de abril de 1966, así como sus seguridades de que era probable que las condiciones estipuladas se cumplieran.

256. A comienzos de febrero de 1966, poco antes de inaugurarse el período de sesiones de la Asamblea General previo a la independencia, la prensa de Sudáfrica informó que Basutolandia se hallaba "casi en estado de sitio". Según esos informes, unidades de la fuerza móvil de seguridad realizaban diariamente ejercicios, y miembros de la policía montada de Basutolandia patrullaban las calles día y noche. Se comentaba que muchos hombres y mujeres habían sido detenidos en virtud de la *Police Offences Act*. Las informaciones periodísticas afirmaban que las medidas extraordinarias de seguridad se habían tomado porque circulaban rumores insistentes de que algunos miembros de los partidos opositores conspiraban para asesinar a los miembros del Gabinete con el objeto de malograr la obtención de la independencia bajo el Gobierno del Basutoland National Party.

257. Un portavoz del Gobierno anunció que una compañía del Regimiento Gloucestershire llegaría a Basutolandia, procedente de Swazilandia, el 15 de febrero de 1966 y permanecería hasta el 4 de marzo para llevar a cabo ejercicios de adiestramiento, principalmente a base de pelotones, en los distritos de Basutolandia.

258. Una noticia periodística posterior expresaba que el 21 de febrero de 1966, al inaugurarse el período de sesiones de la Asamblea Nacional previo a la independencia, la policía montó guardia en el salón de la Asamblea y procedió a registrar a varios miembros del Parlamento cuando entraban al edificio. Dos días más tarde un miembro del Basutoland Congress Party (BCP), el Sr. S. R. Mokhehle, presentó una moción en la que condenaba la intervención policial calificándola de "grave atropello a los privilegios de esta Cámara y sus miembros".

259. Ulteriormente, el representante del BCP en El Cairo, Sr. R. Tsinyane, protestó, según se informó, contra el envío de tropas a Basutolandia por el Reino Unido y contra los arrestos en masa que se produjeron inmediatamente después de la llegada de las mismas. El citado representante pidió que fueran retiradas inmediatamente esas tropas y que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas. Condenó también al Reino Unido, a los Estados Unidos, a Sudáfrica y a la República Federal de Alemania por sus maniobras en Basutolandia y pidió que se dejara al pueblo de Basutolandia determinar su destino por sí mismo.

260. El 7 de marzo de 1966 la Sra. Eirene White manifestó, en respuesta a una pregunta hecha en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que si se recibía un pedido de independencia apoyado por resoluciones de ambas Cámaras del Parlamento de Basutolandia se celebraría en marzo una conferencia constituyente, en la cual, esperaba ella, se fijaría una fecha para la independencia, probablemente en el otoño.

261. En la semana que terminó el 12 de marzo de 1966 se publicó el Libro Blanco del Gobierno con las propuestas para la constitución de Basutolandia independiente. En virtud de la constitución propuesta, el Jefe Supremo pasaría a ser Jefe del Estado. La constitución contendría también disposiciones terminantes relacionadas con la posición del Jefe Supremo, con el territorio de Lesuto, con los derechos políticos, con la posición y facultades de la Asamblea Nacional y del Senado y con la declaración de derechos humanos. Según el Libro Blanco, el Gobierno de Basutolandia negociaría con el Gobierno del Reino Unido para dar solución a diversas cuestiones financieras, varios derechos y obligaciones contenidos en tratados heredados del Gobierno del Reino Unido y la participación en el Commonwealth y en las organizaciones internacionales.

262. El 18 de abril de 1966 el Jefe Jonathan presentó en la Asamblea Nacional una moción por la que se pedía al Gobierno del Reino Unido que concediera la independencia a Basutolandia en las condiciones del acuerdo celebrado en la conferencia constituyente de 1964 y del Libro Blanco del Gobierno mencionado *supra*. Al ser apoyada la moción, la totalidad de la oposición abandonó la sala de la Asamblea. Al día siguiente el Sr. Ntsu Mokhehle, líder de la oposición a la vez que del BCP, retó al Gobierno a que demostrara contar con el apoyo de una mayoría de dos tercios en la Asamblea para sus propuestas constitucionales. Sin embargo, no se aprobó una enmienda propuesta por el Sr. Mokhehle con tal propósito, y tras casi cuatro semanas de debates la Asamblea, el 11 de mayo de 1966, aprobó la propuesta del Gobierno por 32 votos contra 28.

263. Según se informó, el Senado inició la discusión de la moción de independencia hecha por el Primer Ministro el 19 de abril de 1966. Según informacio-

nes periodísticas, se apostaron policías provistos de granadas de gases lacrimógenos durante la sesión del Senado del 2 de mayo de 1966, que se levantó en medio de un tumulto. Se informó que este incidente fue consecuencia de habersele notificado más temprano ese mismo día al Sr. S. P. Makotoko, Presidente del Senado y Jefe del partido opositor Marema-Tlou Freedom Party (MTFP), un mandamiento urgente para que se abstuviera de ejecutar las instrucciones del Jefe Supremo en el sentido de deponer a cinco senadores oficialistas. El Jefe Supremo designó en lugar de aquéllos a cinco partidarios del MTFP, medida que adoptó en virtud de las disposiciones constitucionales que lo facultan para designar once de los treinta y tres senadores. El mandamiento emanado del Tribunal Supremo de Basutolandia permitía sin embargo a los cinco senadores despedidos conservar sus escaños hasta el 12 de mayo de 1966, fecha en que el Tribunal daría su fallo.

264. La disposición del Jefe Supremo sobre la separación de esos senadores fue adoptada el 29 de abril de 1966 después de que los mismos hubieron votado en contra de enmiendas de la oposición. Las enmiendas tenían por objeto que el Jefe Supremo asumiera el mando del ejército, la policía y las fuerzas de seguridad y tuviera poder de veto sobre cualquier modificación de importancia en la Constitución o en la legislación nacional.

265. El 5 de mayo de 1966 el Senado, presidido por un presidente provisional por haberse retirado el titular, aprobó la moción de independencia. De los treinta y tres senadores, veintidós votaron en favor de la moción, ocho votaron en contra y uno se abstuvo. El Tribunal declaró válida la votación del Senado el 12 de mayo de 1966, fecha en que repuso a los cinco senadores depuestos. El Tribunal falló que el Jefe Supremo estaba facultado para designar senadores por propia decisión, pero que la Constitución no establecía que pudiera deponerlos.

266. El 17 de mayo de 1966 el Senado depuso a su presidente y vicepresidente por 23 votos contra 9. Al presentar la moción para deponer al presidente, el Sr. Charles Molapo, Ministro de Desarrollo Económico y uno de los cinco senadores depuestos por el Jefe Supremo pero repuesto como resultado del fallo del Tribunal, dijo que el presidente había dirigido los trabajos del Senado de manera "indigna" durante el debate sobre la moción de independencia. Tras aprobar esta moción, el Senado eligió presidente al Senador N. I. Qhobela y vicepresidente al Jefe S. S. Matete.

La conferencia constituyente de 1966

267. Del 8 al 17 de junio de 1966 se celebró en Londres una conferencia constituyente con miras a adoptar disposiciones constitucionales para la independencia de Basutolandia. Asistieron a dicha conferencia el Jefe Supremo y delegados de todos los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional de Basutolandia, es decir, el BNP, cuyo jefe es el Jefe Leabua Jonathan, Primer Ministro; el BCP, cuyo jefe es el Sr. Ntsu Mokhehle; y el MTFP, cuyo dirigente es el Sr. S. P. Makotoko. El BNP, que actualmente tiene 32 de los 60 escaños en la Asamblea, obtuvo el 42% de los votos en las elecciones de 1965, contra el 56% que obtuvieron los dos partidos de la oposición.

268. Durante los debates en la conferencia, el Jefe Jonathan dijo que todas las condiciones establecidas en

el acuerdo logrado en la conferencia constituyente de 1964 para conceder la independencia a Basutolandia habían sido cumplidas en su espíritu y en su letra. No quedaba al Reino Unido más que otorgar la independencia antes del 4 de octubre de 1966. La posición del Jefe Supremo estaba establecida. Estas opiniones fueron apoyadas firmemente por el Secretario de Estado para las Colonias.

269. En cambio, los dos partidos de oposición rechazaron el argumento del Jefe Jonathan de que las condiciones para la independencia habían sido cumplidas. Señalaron que en la conferencia constituyente de 1964 el Sr. Duncan Sandys, a la sazón Secretario de Estado para las Colonias, se había negado a discutir el destino de los poderes reservados del Gobierno del Reino Unido y había dado una firme seguridad de que este asunto sería estudiado en una conferencia definitiva sobre la independencia. Propusieron que no se otorgaran los poderes reservados al actual Gobierno de Basutolandia; que se dejara al Jefe Supremo una cierta autoridad en determinados asuntos, especialmente las relaciones con Sudáfrica; y que cualquier constitución definitiva fuera sometida a la población de Basutolandia, por medio de una nueva elección general, antes de la independencia.

270. Después de que el Secretario de Estado rechazó estas propuestas, los dirigentes de los dos partidos dieron a conocer dos declaraciones conjuntas el 14 y el 15 de junio de 1966, respectivamente. En la primera declaración advirtieron sobre "las tristísimas consecuencias, como en Zanzibar", que tendría el que el Reino Unido concediese la independencia bajo un gobierno "no representativo de la mayoría del electorado". (Para más detalles, véase apéndice I.) La segunda declaración, formulada después de que los dos partidos se retiraron de la conferencia en señal de protesta, contenía una advertencia acerca de que "en nombre de la mayoría del pueblo suto, anunciamos que no estamos dispuestos a aceptar como obligatoria para nosotros ninguna constitución para la independencia a Basutolandia que se firme entre el Gobierno británico y el gobierno minoritario del Jefe Leabua Jonathan". (Para más detalles, véase apéndice II.)

271. En la sesión final de la conferencia, celebrada el 17 de junio de 1966, se completó el informe⁷ que contenía el acuerdo sobre la Constitución del nuevo Estado independiente de Basutolandia, concluido entre el Reino Unido y la delegación del Gobierno de Basutolandia. La delegación de la oposición no asistió a dicha sesión y no firmó el informe; el Jefe Supremo asistió pero no firmó el informe. Previamente había formulado una advertencia en contra de la concesión de la independencia a los basutos "como una nación dividida, en condiciones de violencia incipiente o efectiva, e incapaz de defender sus propios intereses contra la injerencia extranjera". Dijo que estaba alarmado por "la manera como Basutolandia era empujada hacia la independencia y la aparente despreocupación por los principios necesarios para dar a la moderna Lesuto una constitución adecuada a sus necesidades".

272. El Jefe Jonathan, en la sesión final, declaró que su Gobierno tendría como política basarse en el panafricanismo y la Organización de la Unidad Africana, y daría asilo a los refugiados pero no proporcionaría una

⁷ *Report of the Basutoland Independence Conference, 1966*, Cmd. 3038 (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1966).

base de operaciones contra Sudáfrica, con la que esperaba lograr un acuerdo para el respeto recíproco de los derechos soberanos.

273. Inmediatamente después de la conferencia los dos partidos de oposición apelaron a las Naciones Unidas, al Commonwealth y a la Organización de la Unidad Africana para que la mencionada constitución para el nuevo Estado independiente de Basutolandia fuera abrogada.

Constitución para el nuevo Estado independiente

274. En virtud de la constitución para el nuevo Estado independiente, Basutolandia se convertirá en una nación independiente dentro del Commonwealth el 4 de octubre de 1966, con el nombre de Lesotho. El Jefe Supremo será Jefe del Estado y monarca constitucional. Los poderes actualmente reservados al Reino Unido (relaciones exteriores, defensa, seguridad interna y administración pública) serán transferidos al Gobierno de Basutolandia y no al Jefe Supremo para que los delegue en sus ministros. Según el informe terminado en la sesión final de la conferencia, "la forma de la constitución concuerda con el acuerdo logrado en 1964, firmado por todos los partidos y dirigentes, y con el deseo expresado del Parlamento de Basutolandia".

275. El informe registraba también la opinión del Gobierno del Reino Unido en el sentido de que "existe poca disconformidad general en Basutolandia respecto de los cambios, relativamente de poca importancia, hechos actualmente en la constitución con miras a la independencia", y que "si la ley y el orden, que actualmente se mantienen, son perturbados, quienes busquen simplemente el poder personal serán los responsables".

276. La constitución del nuevo Estado independiente contendrá también una declaración de derechos humanos, con garantías judiciales cuyas características suministrarán una salvaguardia excepcionalmente fuerte para las libertades personales. Sin embargo, no incluirá los términos concretos de un tratado de extradición con Sudáfrica como propuso la oposición.

Situación económica

277. El 4 de febrero de 1966 la Asociación Internacional de Fomento (IDA) aprobó un crédito de 1.500.000 libras esterlinas para Basutolandia, que será empleado para el mejoramiento de una sección de 76 millas de la carretera principal de norte a sur y de un camino secundario de conexión de 17 millas. El proyecto estará destinado a reducir los costos de transporte y de conservación de las carreteras, y a mejorar la situación económica del Territorio convirtiendo la agricultura de subsistencia en agricultura comercial. Se calcula que el costo será de aproximadamente 1.900.000 libras esterlinas, de las cuales 1.500.000 libras provenirán de la IDA y el resto será suministrado por el Gobierno de Basutolandia.

278. El 22 de febrero de 1966 el Gobierno de Basutolandia declaró "un estado de emergencia por sequía" para combatir los efectos de la peor sequía producida en el Territorio desde hacía más de 30 años. El Jefe Leabua Jonathan dijo que preveía una escasez de alimentos durante el invierno y la primavera y que había creado un departamento de emergencia por sequía para coordinar el socorro. En todos los distritos se estaba realizando una evaluación de la situación. Se ha-

bían iniciado negociaciones con el Gobierno del Reino Unido y organizaciones internacionales para obtener alimentos, dinero y transportes.

279. En 1º de marzo de 1966 el Ministro de Finanzas Benedict Leseteli anunció en la Asamblea Nacional que la División de Planificación Económica del Gobierno y la Junta Nacional de Planificación Económica, creadas el mes anterior, estudiarían sus propuestas sobre nuevos impuestos destinados a reducir la balanza de pagos desfavorable de Basutolandia. Según estas propuestas, se crearían impuestos especiales sobre el petróleo, el combustible diesel, las bebidas alcohólicas, los vinos y la cerveza. Habría también un aumento en los derechos que se abonaban por las licencias comerciales y de conductor y los registros de vehículos automotores.

280. El Sr. Leseteli anunció también que los ingresos y gastos públicos del Territorio para 1966-1967 habían sido fijados en 2.170.000 libras esterlinas y 4.920.000 libras esterlinas respectivamente y que el Reino Unido había acordado otorgar 2.750.000 libras esterlinas a fin de que Basutolandia pudiera equilibrar su presupuesto para ese año.

281. En junio de 1966, en la conferencia constituyente para Basutolandia, el Jefe Jonathan hizo una tentativa infructuosa de lograr que se discutiera la futura asistencia financiera antes de completar el acuerdo sobre la constitución del nuevo Estado independiente.

3. BECHUANIA

Evolución política y constitucional

Relaciones con Sudáfrica

282. A comienzos de febrero de 1966 se informó que se había concluido un acuerdo sobre el funcionamiento de un servicio aéreo entre Bechuania y Sudáfrica, por la Bechuanaland National Airways, subvencionada por el Gobierno y creada en noviembre de 1965. La compañía de aviación realiza también vuelos a Salisbury, Rhodesia del Sur y Livingstone, Zambia.

283. El 22 de febrero de 1966, después de la clausura de la conferencia constituyente sobre la independencia de Bechuania, el Primer Ministro, Sr. Seretse Khama, dijo que no le parecía probable que Sudáfrica deseara un intercambio de representantes diplomáticos con Botswana (el nuevo nombre del Territorio); señaló que las relaciones de Botswana seguirían siendo manejadas por el representante del Reino Unido en Sudáfrica. Dijo también que Botswana no sería demasiado exigente en la aplicación de las normas sobre pasaportes a las personas que entraran en el país, especialmente refugiados procedentes de Sudáfrica.

284. En abril de 1966 se celebró en Mochuli la conferencia anual del Bechuanaland Democratic Party (BDP), cuyo líder es el Sr. Khama. La conferencia confirmó los planes del Sr. Khama para la entrada de Bechuania en el Commonwealth, en la Organización de la Unidad Africana y en las Naciones Unidas, y para mantener relaciones amistosas con Basutolandia y Swazilandia. La conferencia destacó la importancia de mantener las políticas del Gobierno de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y de buena vecindad con los países limítrofes. Sin embargo, la conferencia estableció claramente que la no injerencia y la buena vecindad no significaban que Bechuania no condenara "en los términos más enérgicos posibles cualquier po-

lítica inhumana que pudiera aplicarse en dichos Estados”.

285. En mayo de 1966, después que la Comisión de Administración Pública, que anteriormente era un órgano asesor, asumió los poderes ejecutivos, el Sr. Khama manifestó que continuaría la localización de la administración pública, aunque no a expensas de la eficiencia, y que quería que todos los funcionarios públicos procedentes del exterior permanecieran en el país durante todo el tiempo que éste los necesitara. Anteriormente, el Gobierno había negado que hubiera discriminación contra los sudafricanos en la administración pública.

Otros acontecimientos

286. A pesar de la oposición que se dice existir por parte del Sr. Khama y algunos otros dirigentes políticos, incluso el Sr. Motsamai Mpho del Botswana Independence Party (BIP), el Gobierno del Reino Unido, después de la declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur, construyó una estación de radio en Francistown para retransmitir noticias y programas a Rhodesia del Sur y otros lugares, y ha enviado unos 120 soldados británicos para ayudar a proteger la estación.

287. El BDP obtuvo una victoria abrumadora en las primeras elecciones al Gobierno local de Bechuania, celebradas el 14 de junio de 1966. Según los resultados comunicados respecto de 139 de los 165 escaños en tres nuevos municipios y 9 nuevos consejos de distrito, se informó que el partido había obtenido 117 asientos contra 22 de los partidos combinados de la oposición.

288. El 23 de junio de 1966 se anunció que el señor J. S. Gandee sería el Primer Alto Comisionado Británico para Botswana, una vez que Bechuania lograra la independencia con el nombre de Botswana, el 30 de septiembre de 1966.

Situación económica

289. Después de cinco años de pocas lluvias, desde comienzos de 1965 ha existido una situación de hambre en toda la extensión del Territorio de Bechuania. Hacia fines de dicho año unas 105.000 personas indigentes recibían suministros de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El 1° de febrero de 1966 la Sra. Eirene White, Subsecretaria Parlamentaria de Estado para las Colonias, manifestó, en una respuesta escrita a una pregunta formulada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que se estaba ampliando el programa de alimentos de emergencia de Bechuania para que abarcara a más de 300.000 personas en 1966, y que se había hecho un pedido de asistencia complementaria al Programa Mundial de Alimentos. Agregó que el Gobierno del Reino Unido había suministrado 350.000 libras esterlinas para el programa de ayuda durante el ejercicio económico de 1965-1966 y había aprobado un gasto de 250.000 libras esterlinas del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial para proyectos destinados a mitigar los efectos del hambre. En 11 de febrero de 1966 se anunció que se asignarían a estos proyectos otras 200.000 libras esterlinas.

290. En la apertura de la conferencia constituyente sobre la independencia de Bechuania, el 14 de febrero de 1966, el Secretario de Estado para las Colonias dijo que la situación de hambre en el Territorio continua-

ría en 1966 y se prolongaría hasta 1967. Iba a ser necesario, evidentemente, un enorme esfuerzo para ampliar la economía, desarrollar la agricultura, el agua y otros recursos y fomentar la educación. El Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a estudiar lo que podría hacer para ayudar al desarrollo del Territorio. Anteriormente se había anunciado que Bechuania recibiría subsidios de desarrollo por un importe de 1.300.000 libras esterlinas para cada uno de los ejercicios económicos de 1965-1966 y 1966-1967, en comparación con un promedio de 500.000 libras esterlinas anuales para los cinco ejercicios económicos anteriores.

291. Según un portavoz del Departamento de Agricultura, en febrero y marzo de 1966 la precipitación pluvial en el Territorio había sido mayor que durante los dos años anteriores. El pastoreo había mejorado considerablemente y el ganado enflaquecido estaba recuperando rápidamente su peso, lo que favorecía sus perspectivas de subsistir durante el invierno de 1966. La muerte de cabezas de ganado, calculada a comienzos de este año en más de 400.000 dentro de un total nacional de 1.300.000 cabezas, se había detenido prácticamente en casi todas las zonas. Las lluvias habían proporcionado también a los agricultores la oportunidad de hacer cultivos de germinación rápida para el consumo humano y animal. Sin embargo, esto tendría un efecto reducido sobre la escasez de alimentos acumulada como consecuencia de cinco años de sequía, y agravada considerablemente por el fracaso casi total de la cosecha de 1966.

292. En 21 de abril de 1966, después de haber aumentado dos meses antes sus compromisos de ayuda contra el hambre hasta aproximadamente 3.300.000 dólares, el Programa Mundial de Alimentos aprobó una solicitud de ayuda de Bechuania por un total de 13 millones de dólares para ayudar a reconstruir su economía agraria. El Programa Mundial de Alimentos acordó ayudar a realizar tres proyectos relativos a la alimentación del ganado, el desarrollo de la comunidad y un programa quinquenal complementario de alimentación para niños, futuras madres y madres lactantes.

4. SWAZILANDIA

Evolución política y constitucional

Informe del Comité Constitucional de Swazilandia

293. Como ya se ha señalado, las propuestas relativas a una nueva constitución que figuran en el informe del Comité Constitucional de Swazilandia⁸ se sometieron a consideración del Secretario de Estado, y se presentaron al Consejo Legislativo en marzo de 1966.

294. En su informe el Comité expresó que había formulado sus propuestas después de examinar cuidadosamente la práctica constitucional en muchos otros territorios, así como memorandos y sugerencias presentados por particulares y por algunos órganos interesados. Entre estos últimos se contaban el Consejo Mixto de Partidos Políticos de Swazilandia, el Ngwane National Liberatory Congress (NNLC) y el Swaziland Progressive Party (SPP).

295. En una fase temprana de sus deliberaciones el Comité había expuesto al Secretario de Estado la necesidad de que la nueva constitución se basase en una

⁸ *Report of the Swaziland Constitutional Committee*. Swaziland Printing and Publishing Company Limited, Mbabane, Swazilandia, 24 de marzo de 1966.

forma monárquica de gobierno, reconociéndose al Ngwenyama como rey de Swazilandia, y de que el Territorio pasara de la condición de protectorado a la de Estado Protegido, como una etapa de transición previa a la independencia.

296. En su respuesta el Secretario de Estado dijo que el Gobierno de Su Majestad se proponía conceder la autonomía interna a Swazilandia en 1966 y que, si así se deseaba, estaría dispuesto a tomar medidas para la concertación con el Ngwenyama de un acuerdo por el que Swazilandia se convirtiese en un Estado Protegido, reservándose al Gobierno de Su Majestad ciertos poderes, principalmente en lo referente a las relaciones exteriores, defensa y otras cuestiones especificadas en la Constitución. Su Majestad también retendría la facultad de enmendar o reemplazar la Constitución. Se renunciaría a todos los poderes salvo los que se especificasen en el acuerdo.

297. Los miembros no oficiales del Comité habían afirmado reiteradamente su deseo de llegar a una completa independencia lo más pronto posible, y el Secretario de Estado, al aceptar este principio, había dicho claramente que esto se produciría a más tardar a fines de 1969. Era creencia e intención del Comité que la Constitución proyectada sería en principio la constitución definitiva para una Swazilandia independiente, que sólo requeriría enmiendas menores en la fase de la independencia total dentro del Commonwealth.

298. Conforme a las nuevas propuestas constitucionales, se reconocería al Ngwenyama como Rey y Jefe de Estado. La sucesión se regiría por las leyes y costumbres swazis.

299. El Rey designaría al Primer Ministro y a otros ministros y tendría derecho a que sus ministros le informasen y consultasen sobre todos los asuntos de gobierno. Actuaría a base del asesoramiento ministerial salvo en los casos en que la constitución propuesta dispusiese específicamente otra cosa. Sin embargo, tendría el derecho de requerir al Primer Ministro que reconsiderase en el Gabinete toda cuestión que se le presentase.

300. Se establecerían disposiciones referentes al cargo de Comisionado de Su Majestad. Con la asistencia de un Adjunto, el Comisionado de Su Majestad retendría la responsabilidad por los asuntos exteriores, la defensa y la seguridad interna. Sin embargo, estaría facultado para delegar cualquier parte de estas responsabilidades en un ministro designado por el Primer Ministro; tal delegación podría hacerse sujeta a condiciones, y ser revocada.

301. El Comisionado de Su Majestad tendría ciertas facultades en materia de contralor financiero, con el fin de asegurar una adecuada administración financiera u obtener el cumplimiento de una condición puesta a un subsidio financiero concedido por el Gobierno de Su Majestad al Gobierno de Swazilandia.

302. El Comisionado de Su Majestad estaría también facultado para requerir del Gobierno de Swazilandia que presentase y asegurase la aprobación de la legislación que considerase necesaria o conveniente en cumplimiento de sus responsabilidades. Si el Gobierno no lo hiciese, él mismo podría dictar un decreto que tendría fuerza de ley; en este caso podría requerir del Gobierno que tomase las medidas de ejecución necesarias o, si éste no lo hiciese, él mismo podría ejercer cualquier función legítima de gobierno con este fin.

303. Se establecería un Consejo Consultivo, integrado por un número limitado de representantes locales del Gobierno de Su Majestad y representantes del Gobierno de Swazilandia a los fines de la celebración de consultas entre ambos Gobiernos en lo referente al ejercicio de las facultades reservadas al Comisionado de Su Majestad.

304. El Parlamento de Swazilandia tendría dos Cámaras: una Cámara de Diputados y un Senado. La Asamblea estaría compuesta de un Presidente, veinticuatro miembros elegidos, seis miembros designados, que serían nombrados por el Rey a fin de representar intereses que no tuviesen otra representación adecuada, y el Procurador General, que no tendría voto.

305. El Senado estaría compuesto de un Presidente y doce miembros, la mitad elegidos por los miembros de la Cámara de Diputados y la otra mitad designados por el Rey a fin de representar intereses que no tuviesen otra representación adecuada.

306. Swazilandia se dividiría en ocho distritos que elegirían a tres miembros cada uno y que serían delimitados y mantenidos bajo observación por una Comisión de Delimitación compuesta de un juez de la Suprema Corte de Swazilandia, en carácter de Presidente, y otros dos miembros designados por la Comisión de Servicio Judicial.

307. Con sujeción a ciertas excepciones referentes a personas tales como delincuentes y locos, todos los ciudadanos de Swazilandia, o ciudadanos del Reino Unido y sus colonias que llenasen los requisitos de tener tres años de residencia, y haber cumplido la edad de 21 años, o cuyo cónyuge tuviese esa edad, estarían calificados para inscribirse como votantes.

308. Con sujeción a las disposiciones de la constitución propuesta, el Parlamento tendría plenas facultades para legislar en beneficio de la paz, el orden y el buen gobierno de Swazilandia, facultades que se ejercerían mediante proyectos de ley aprobados por ambas Cámaras y promulgados por el Rey.

309. La Cámara de Diputados estaría facultada, con exclusividad, para la iniciativa legislativa sobre cuestiones fiscales y financieras, y en general se encargaría de iniciar leyes sobre otras cuestiones, pero no estaría facultada para legislar con respecto a las leyes y costumbres swazis, a menos que así lo autorizase el Consejo Nacional Swazi. El Senado tendría iniciativa legislativa en cuestiones que no fuesen fiscales y financieras, ni referentes a las leyes y costumbres swazis.

310. Cada Cámara estaría facultada para devolver a la otra proyectos de ley para mayor examen, pero el Senado no podría demorar la aprobación de un proyecto de asignación presupuestaria. En el caso de un proyecto de ley de carácter financiero que no fuese de autorización de gastos, si el Senado no lo aprobase dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su salida de la Cámara, o lo aprobase con enmiendas inaceptables para esta última, la Cámara podría presentar el proyecto al Rey para su promulgación.

311. Cada Parlamento estaría en funciones durante cinco años, a menos que se lo disolviese antes. El poder de prorrogar o disolver el Parlamento correspondería al Rey, que normalmente actuaría previo respaldo ministerial, aunque podría hacerlo a su discreción en caso de que la Cámara aprobase un voto de no confianza en el Gobierno o si, en caso de quedar vacante el cargo de Primer Ministro, no hubiese perspectivas razonables

de encontrar para él a una persona que contase con mayoría en la Cámara.

312. Con sujeción a los poderes conferidos al Comisionado de Su Majestad, la autoridad ejecutiva recaería en el Rey. Habría un Gabinete integrado por el Primer Ministro, el Viceprimer Ministro y otros seis ministros como máximo. Habría también ministros adjuntos. La función del Gabinete consistiría en aconsejar al Rey en el Gobierno de Swazilandia, y sería colectivamente responsable ante el Parlamento por todo asesoramiento que se prestase al Rey. El Rey designaría como Primer Ministro al jefe del partido político o coalición de partidos que contase con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara. El Viceprimer Ministro, los otros ministros y los ministros adjuntos serían designados por el Rey conforme al asesoramiento del Primer Ministro.

313. El Rey tendría la facultad de gracia, a su discreción. Sin embargo, habría un comité formado por el Procurador General y tres ministros designados por el Rey para asesorarlo en el ejercicio de esta prerrogativa.

314. El Consejo Nacional Swazi continuaría asesorando al Ngwenyama en todas las cuestiones regidas por las leyes y costumbres swazis, y relacionadas con las tradiciones y la cultura de los swazis. El Ngwenyama estaría investido de todos los derechos de la Nación Swazi en materia de tierras y minerales, y los ejercería en nombre de la Nación.

315. El Comité propuso también el establecimiento de comisiones separadas, con facultades ejecutivas, para la administración pública y los servicios judiciales. También se recomendaron una judicatura independiente y un sistema judicial integrado para el Territorio.

316. La constitución propuesta incluiría un código de derechos y libertades fundamentales, que haría cumplir la Suprema Corte.

317. Las disposiciones relativas a la posición del Rey, el código de derechos fundamentales, la judicatura, las Comisiones de Administración Pública y de Servicios Judiciales y los procedimientos para enmendar la constitución serían permanentes, y sólo podría modificárselos mediante un referéndum en el que así se decidiese por el 75% de todos los votos válidos emitidos.

318. Algunas otras importantes disposiciones serían también permanentes y no podrían alterarse a menos que así lo decidiese el 75% de los miembros presentes y votantes en una sesión conjunta de ambas Cámaras del Parlamento. Entre éstas se contarían la composición y los poderes del Parlamento y el mantenimiento del *status* y los poderes actuales del Consejo Nacional Swazi.

319. Dos de los doce miembros no oficiales del Comité, representantes ambos del United Swaziland Party, expresaron ciertas reservas, una de las cuales era la de que, por un período interino, hubiese dos listas electorales separadas con igual representación para europeos y africanos. Esta propuesta fue rechazada más tarde en el Consejo Legislativo, que el 5 de abril de 1966 aprobó por unanimidad una moción del Príncipe Makhosini Dlamini, líder del Imbokodvo Party, que apoyaba las recomendaciones de la mayoría del Comité.

320. Sin embargo, la prensa informó ulteriormente que el Ngwane National Liberatory Congress (NNLC) y el Swaziland Progressive Party (SPP) habían rechazado las propuestas del Comité y habían solicitado

que se celebrase una "conferencia cabalmente representativa". Se informó que los principales puntos de su protesta eran: a) que no se había consultado a la masa del pueblo sobre la constitución propuesta, b) que bajo las leyes y costumbres swazis, que estarían amparadas por la constitución, el Rey no podía ser objeto de discusión ni de impugnación oficial, y c) que la creación de distritos electorales que eligieran tres miembros cada uno estaba destinada a perpetuar el régimen existente.

Situación económica

321. En 1965 la economía de Swazilandia demostró ser razonablemente próspera pese a la aparición de la fiebre aftosa y a la sequía. En el sector agrícola la producción de frutas envasadas, frutas cítricas, algodón, productos forestales, sobrepasó a la de los años anteriores. La cosecha de algodón de 1965 llegó a las 6.518 toneladas cortas (con un valor superior en un 60% al de 1964), de las cuales el 19% fueron producidas por agricultores swazis. El azúcar siguió siendo la exportación más valiosa del Territorio, con una producción valuada en más de 5 millones de libras esterlinas. El desarrollo de la industria ganadera recibió impulso con el establecimiento, en la segunda mitad de 1965, de la Swaziland Meat Corporation. En enero de 1966 se informó que dicha corporación había enviado al Reino Unido 1.750 cajas de productos envasados y 100 toneladas de carne congelada. Se estaban llevando a cabo negociaciones con importadores de algunos otros países europeos.

322. La producción minera de 1965, valuada en más de 5 millones de libras esterlinas, fue casi el doble de la de 1964. La mayor parte de este aumento correspondió a la producción de mineral de hierro, que totalizó 1.124.310 toneladas cortas, con un valor de más de 2 millones de libras esterlinas.

323. El Sr. A. C. Venn, Director de Agricultura, dijo a mediados de marzo que su Departamento había iniciado un programa de gran magnitud para la capacitación de agricultores y de personal del Departamento. Entre marzo y fines de agosto se dictaron no menos de 22 cursos breves, en los que participaron unas 700 personas. Se había planeado un programa similar para el resto del año.

324. El 25 de marzo de 1966, al presentar el presupuesto al Consejo Legislativo el Sr. Frank Essex, Secretario de Hacienda y Desarrollo, dijo que el sector agrícola de la economía había obtenido buenos rendimientos en 1965 y que, como resultado de la campaña por un esfuerzo más concentrado instituida por el Departamento de Agricultura, el Territorio se bastaría a sí mismo, por lo menos en cuanto al maíz, en 1966. Con respecto a otros sectores, señaló que el progreso del desarrollo de la conglomeración industrial de Matsapa era alentador y que en su opinión la industria minera desempeñaría un papel aún más importante en la economía con el correr del tiempo.

325. El Sr. Essex señaló que las inversiones hechas por las diversas empresas no se habían reflejado aún completamente en los ingresos del Gobierno. Se esperaba que los ingresos correspondientes al ejercicio financiero iniciado el 1º de abril de 1966 fueran de unos 3 millones de libras esterlinas, es decir 1.200.000 libras menos que los gastos totales estimados; este déficit se enjugaría mediante un subsidio del Reino

Unido. Señalando que se habían eliminado del programa de gastos partidas urgentes para obras de capital, consideró que el Gobierno debía aplicar sin más demora las propuestas presentadas en el presupuesto de 1965 sobre un impuesto a la renta escalonado.

326. A principios de 1966 la Swazi y la Air Portuguese D. E. T. A. Airways inauguró un servicio conjunto entre Matsapa y Lourenço Marques. También se estaban tomando medidas para mejorar la línea ferroviaria hacia Lourenço Marques, con objeto de aumentar las exportaciones de minerales.

F. NUEVO EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁹

Introducción

327. El Comité Especial volvió a examinar la cuestión de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia en sus sesiones 456a. a 458a., celebradas en Nueva York del 6 al 8 de julio de 1966.

Peticiones escritas y audiencias¹⁰

Peticionario

Documento No.

Basutolandia

Sres. Chazi M. W. L. Mapefane y Ntsi C. A. Mohale, representantes del Basutoland Congress Party (BCP) A/AC.109/PET.515/Add.1

Sres. S. P. Makotoko y Edwin Leanya, Marema-Tlou Freedom Party (MTFP) y Sres. G. M. Kolisang y G. Ramoreboli, Basutoland Congress Party (BCP) A/AC.109/PET.515/Add.2

Bechuania

Sr. Bobby Mack, Representante Principal del Bechuanaland People's Party (BPP) en El Cairo A/AC.109/PET.526

Sra. D. Henderson A/AC.109/PET.527 y Add.1

Swazilandia

Sr. D. C. D. Nxumalo, representante del Swaziland Progressive Party (SPP) en El Cairo A/AC.109/PET.442/Add.3

Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

Sr. J. J. Nquku, Presidente, Swaziland Progressive Party (SPP) A/AC.109/PET.525

Audiencia de peticionarios

328. En sus sesiones 456a. y 458a. el Comité Especial concedió audiencia a dos peticionarios en relación con Basutolandia, los Sres. Seth Makotoko, Presidente del Marema-Tlou Freedom Party (MTFP) y

⁹ Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) en que figura un resumen de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, en cuanto a los Territorios considerados por el Comité durante sus reuniones en África.

¹⁰ Las peticiones escritas fueron distribuidas después que el Comité Especial había aprobado una resolución sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia (véase párrs. 237 *supra*) en su 439a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1966, y había llegado a un consenso (véase párr. 390 *infra*) en su 458a. sesión, celebrada el 8 de julio de 1966.

Kolisang, Secretario General del Basutoland Congress Party (BCP) (A/AC.109/PET.515).

329. El Sr. Makotoko (MTFP) dijo que el BCP y el MTFP habían presentado al Comité una petición (A/AC.109/PET.515) en la que protestaban contra la actitud adoptada por el Gobierno del Reino Unido en ocasión de la reciente conferencia constituyente de Londres, con respecto a las condiciones en que Basutolandia obtendría la independencia. A fin de precisar ciertas cuestiones que se planteaban en los párrafos 5 y 9 de dicha petición se preparó un anexo, que todavía no se había podido comunicar a los miembros del Comité. En la conferencia se había examinado la cuestión de los poderes que quedarían reservados al Gobierno del Reino Unido en el momento de la independencia, y que serían los correspondientes a las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad interior; también se habían examinado las funciones del Jefe Supremo. Los representantes de Basutolandia, cuya posición había sido unánime en la conferencia de 1964, expresaron opiniones divergentes porque el Gobierno del Reino Unido procuraba imponer al pueblo basuto una constitución que éste no podía aceptar. Según el informe de la Comisión Constitucional de 1963¹¹, todos los partidos políticos habían aceptado que el poder ejecutivo fuese adjudicado al Jefe Supremo, en su calidad de Jefe del Estado, a fin de que los ejerciese no por sí mismo, sino por conducto de los ministros responsables. Esto significaba que los poderes reservados volverían a recaer en el Jefe Supremo en el momento de alcanzarse la independencia. Ahora bien, el Gobierno del Reino Unido deseaba que en adelante las cuestiones relativas a las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad interior dependieran directamente del Primer Ministro. Esta posición era contraria a la que se había adoptado inicialmente. Además, el pueblo de Basutolandia deseaba que el Jefe Supremo lo pudiera consultar, por vía de referéndum, sobre todos los acuerdos que pudieran traer aparejado un menoscabo de la soberanía y la integridad territorial de la nación basuto.

330. Por lo demás, la población no había tenido la posibilidad de dar a conocer su posición con respecto al cambio registrado en la política del partido minoritario que a la sazón estaba en el poder. Si la constitución no contuviera ninguna cláusula que permitiera al Jefe del Estado consultar al pueblo sobre cualquier acuerdo que se concertara con Sudáfrica, Basutolandia correría el riesgo de quedar a merced de dicho país. El Sr. Makotoko citó un artículo publicado en enero de 1966 en el periódico sudafricano *Star*, en el cual se exponían las intenciones de anexión de Sudáfrica.

331. A los efectos de consultar a la población sobre este asunto, el Jefe Supremo había celebrado, del 28 de mayo al 5 de junio de 1966, una serie de asambleas tradicionales o *pitso*s; se le había pedido que no firmase la constitución si ésta no garantizaba la soberanía y la integridad del Territorio una vez obtenida la independencia. Al peticionario le parecía que el Reino Unido procuraba esquivar sus responsabilidades en vísperas de la independencia y continuaba subordinando los intereses del pueblo de Basutolandia a los de la República de Sudáfrica. En efecto, en el plano económico el Reino Unido ni había tratado de sustraer a Basutolandia de la dependencia de Sudáfrica ni tampoco parecía dispuesto

¹¹ Basutoland Council: *Report of the Basutoland Constitutional Commission*, Maseru, 1963.

a ayudarla financieramente, aun cuando hubiera utilizado los excedentes de los ingresos de Basutolandia para invertirlos en otros Territorios, especialmente en Swazilandia.

332. El peticionario citó el párrafo 15 del Libro Blanco¹² relativo a las propuestas del Gobierno de Basutolandia sobre la obtención de la independencia y dijo que era elocuente a ese respecto. Mientras que en Ghana, Gambia, Tanganyika y Zanzíbar el Reino Unido había insistido en la necesidad de establecer el gobierno sobre una base muy amplia, continuaba desestimando los intereses de la población de Basutolandia fomentando la división del Territorio. Deseosos de garantizar la unidad nacional en vísperas de la independencia, los partidos habían intentado un acercamiento después de las elecciones generales de 1965, pero tropezaron con la oposición del Gobierno. Análogamente, algunas semanas antes de la conferencia constituyente de Londres, el Gobierno basuto rechazó la oferta que le hacían el MTFP y el BCP de colaborar en la redacción de una constitución que pudiera ser aceptable para toda la población.

333. Al peticionario le inquietaba comprobar que muchos servicios del Gobierno, especialmente la policía, se confiaban en la actualidad a expatriados blancos sudafricanos. Los viajes a Sudáfrica de los jefes de los partidos políticos de la oposición eran objeto de restricciones, mientras que los miembros del partido actualmente en el poder tenían libre acceso a ese país; por añadidura, tanto el Gobierno sudafricano como las empresas mineras apoyaban la organización de reuniones políticas para los basutos que trabajaban en Sudáfrica.

334. El MTFP deseaba que las Naciones Unidas ayudasen al pueblo de Basutolandia a obtener una constitución que garantizara la soberanía y la integridad de su territorio. A tal efecto las Naciones Unidas podrían ayudar a organizar un referéndum que fuera fiscalizado por observadores internacionales. Sería preciso que el Reino Unido, que no había cumplido todas las obligaciones que le imponía la Carta de las Naciones Unidas con respecto al pueblo de Basutolandia, aplicara, en particular, las resoluciones 1817 (XVII) y 2063 (XX) de la Asamblea.

335. Por último, citó extractos de artículos de periódicos sudafricanos a fin de que el Comité se percatara de que, contrariamente a lo que afirmaba el Gobierno del Reino Unido, en Basutolandia no reinaba ni la paz ni la calma. Según dichos artículos era posible que la población de Basutolandia se viera obligada a expresar su descontento de una manera más virulenta, pues las intenciones de anexión del Gobierno sudafricano eran evidentes.

336. Contestando a varias preguntas, los Sres. Makotoko y Kolisang hicieron las declaraciones que constan a continuación.

337. En el párrafo 79 del informe de 1963 de la Comisión Constitucional de Basutolandia se exponía una posibilidad que consistía en traspasar al pueblo basuto la plena soberanía y que Motlotlehi, el Jefe Supremo, ejerciera las funciones de Jefe del Estado conforme a las disposiciones de la constitución. Esta posibilidad fue escogida por el pueblo de Basutolandia a unanimidad,

pero en la conferencia de 1964 el Gobierno del Reino Unido no la aceptó. Por consiguiente, fue preciso aplazar el examen de las condiciones en las cuales el Jefe Supremo podría ejercer el poder ejecutivo, incluso los poderes reservados, hasta una conferencia que se habría de celebrar poco antes de la independencia.

338. En la conferencia de 1966 todos los poderes ejecutivos fueron confiados al Primer Ministro sin permitirse debate alguno. Esa posición de los Gobiernos de Basutolandia y del Reino Unido se apartaba de los acuerdos de 1963 y 1964.

339. La controversia versó sobre el traspaso de los poderes reservados. Cuando se vio claramente que no se examinaría la cuestión, la oposición abandonó la conferencia de 1966, perdidas sus esperanzas.

340. La declaración hecha en Londres por el MTFP constituía una advertencia al Gobierno del Reino Unido por seguir negándose a tener en cuenta la opinión de los representantes de la mayoría del pueblo. El pueblo de Basutolandia no podía asociarse a una constitución que le había sido impuesta. El Gobierno del Reino Unido había dado a entender, más o menos, que esperaba dificultades y de antemano echaba la culpa a los partidos de la oposición. Eso demostraba que el Reino Unido se daba perfecta cuenta de que en Basutolandia había creado una situación en la cual no podía reinar ninguna paz.

341. El pueblo de Basutolandia había organizado numerosas manifestaciones contra la constitución, y el Primer Ministro había pedido su dimisión al Jefe Supremo. De este modo, el hecho de imponer la constitución creaba disensiones en la población. En 1965 al BCP se le había hecho continuamente objeto de medidas de excepción no declaradas, en virtud de las cuales el Reino Unido había negado a los partidos políticos de la oposición el derecho de reunirse libremente. Así pues se podía prever que este estado de urgencia se prolongaría. Por lo tanto, la imposición de la constitución provocaría también la represión de las aspiraciones naturales del pueblo.

342. La organización de elecciones o de un referéndum antes de la independencia crearía ciertas dificultades. De todos modos, no debería retardarse la independencia por más tiempo que el absolutamente indispensable para dar a la nación basuta la posibilidad de elegir la clase de independencia que deseaba. El retraso se justificaría si permitiese llegar a la independencia como nación unida y sin subterfugios capaces de destruirla.

343. Los dos partidos de la oposición habían tratado en vano de establecer la unidad entre los dirigentes de la opinión pública de Basutolandia. Pero nunca era demasiado tarde para hacer nuevos esfuerzos en ese sentido. Al formar una alianza, esos partidos no estaban tratando de constituir un frente común contra el Basutoland National Party (BCP). Si esa alianza pudiera hacerse más amplia con la inclusión del partido gubernamental estarían ya vencidos en su mayor parte los peligros que amenazaban a Basutolandia.

344. Siempre se había considerado en Basutolandia que toda negociación con una Potencia extranjera debería realizarse conjuntamente por el Jefe Supremo y los demás jefes de la nación y que en tales negociaciones el Jefe Supremo debía desempeñar el papel principal. No se había llegado a ningún acuerdo acerca de la invitación al Jefe Supremo para asistir a la confe-

¹² Véase el anexo B del *Report of the Basutoland Independence Conference, 1966*. Cmd. 3038 (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1966).

rencia de 1966 en calidad de observador únicamente. Los Gobiernos de Basutolandia y del Reino Unido habían tratado de excluirle de la conferencia completamente. Sólo por la insistencia de los partidos de la oposición le había sido posible asistir como observador.

345. En la actualidad a ciertos basutos que desagradaban al Gobierno sudafricano les estaba prohibido salir de Basutolandia y volver a ella. Se pusieron especialmente de relieve los casos del Presidente del MTFP y de diez estudiantes basutos que pertenecían al BCP. El Gobierno de la República de Sudáfrica negaba también el derecho de tránsito a nacionales de países independientes cuando no eran de su agrado. Esas medidas se tomaban pese a las resoluciones de las Naciones Unidas que preveían expresamente este derecho. A los jefes de los partidos de oposición no se les dejaba entrar en Sudáfrica, y tampoco se les había hecho saber por qué razón. Entre unos 200.000 basutos que trabajaban en Sudáfrica, se repatriaba, después de someterlo a vejámenes, a quienquiera fuera conocido como miembro activo de uno de los dos partidos: de ahí que a los dos partidos políticos les fuera imposible actuar entre los basutos de la República de Sudáfrica, al paso que un tercer partido tenía absoluta libertad de acción y que sus reuniones se desenvolvían con la aprobación de las autoridades municipales y de las compañías mineras.

346. En lo concerniente a las últimas elecciones generales, Sudáfrica había obligado a un gran número de basutos a regresar a su país para que votaran, con la advertencia de que poco importaba el partido por el cual votasen, pero que no debían volver a trabajar en la República de Sudáfrica si cierto partido perdía las elecciones. El ejemplo más notorio de la injerencia de Sudáfrica se produjo cuando el Sr. Verwoerd hizo un obsequio personal de 100.000 sacos de cereales al Primer Ministro, que se presentaba a elecciones parciales en Basutolandia; esos 100.000 sacos, que de haber sido ofrecidos oficialmente al Gobierno hubiesen permitido constituir un fondo de socorro contra el hambre para todo el país, podían ser utilizados por aquél a su antojo, lo que tenía evidentemente por finalidad asegurarle la mayoría en su circunscripción. Otros ejemplos eran la entrega de 10.000 libras esterlinas, por el Gobierno sudafricano, para llevar al actual Gobierno de Basutolandia al poder, y la participación de nacionales de Sudáfrica en las elecciones de Basutolandia.

347. Cerca de la mitad de las tierras que constituían el Territorio en un principio había sido cedida por el Reino Unido a Sudáfrica, hacía 90 años. Los basutos esperaban aún poder recuperar algún día ese bien del que fueron despojados engañosamente. No había propiedad en poder de extranjeros en el resto del Territorio.

348. Llegado el momento, el MTFP sometería al Subcomité de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia sugerencias acerca de la protección de la soberanía de Basutolandia, pero se subrayó que toda seguridad que el Comité Especial pudiera dar al pueblo basuto en lo concerniente a la integridad del Territorio y a su independencia podría anularse con acuerdos concertados por un gobierno de minoría, si se permitiera la entrada en vigor de una constitución que no se ajustase a los intereses reales del pueblo basuto. De ahí la necesidad de que, ante todo, el Comité Especial tratara de persuadir al Reino Unido de que elaborase una constitución que permitiera a Basutolandia pronunciarse sobre cualquier tratado concluido con un país extranjero.

349. También se señaló a la atención del Comité Especial el aspecto económico de la cuestión. El Reino Unido había permitido que la economía de Basutolandia pasase a depender enteramente de Sudáfrica, lo que podía comprometer la independencia del país. Si las Naciones Unidas pudiesen, proporcionando a Basutolandia una asistencia financiera, hacer que dependiese menos de Sudáfrica, los propios basutos harían mucho por mejorar su situación económica.

350. Más adelante el Sr. Kolisang presentó al Comité Especial varias informaciones complementarias sobre la situación de Basutolandia. En su declaración (véase el párr. 362 *infra*) la Potencia Administradora había alegado que la primera iniciativa tomada por el Reino Unido para modificar la situación constitucional de Basutolandia databa de 1956; en realidad, fue el consejo nacional de Basutolandia el que, mediante la moción No. 90, pidió en 1955 al Gobierno del Reino Unido que introdujese modificaciones constitucionales. Un documento presentado por el BCP y distribuido a los miembros de la Cuarta Comisión en diciembre de 1962, señalaba que el Secretario de Estado para las Colonias había contestado en 1956 que no se concedería al pueblo basuto una constitución que le permitiese promulgar leyes aplicables a la población blanca de Basutolandia. En lo relativo a las cuatro primeras etapas de la evolución constitucional del Territorio era cierto que todas las partes habían dado su consentimiento, pues deseaban negociar en un espíritu de mutua comprensión. Sin embargo, en la conferencia constituyente de 1964 mal podía llegarse a un acuerdo sobre el traspaso al Primer Ministro de Basutolandia, en el momento de la independencia, de los poderes reservados que ejercía el Gobierno del Reino Unido pues esa cuestión no fue abordada en absoluto.

351. Refiriéndose a los párrafos 76 y 79 del informe de la Comisión Constitucional de Basutolandia de 1963, el peticionario señaló a la atención del Comité que los partidos políticos se habían puesto de acuerdo sobre el traspaso de los poderes reservados porque creían que durante el período anterior a la independencia el estatuto de Basutolandia sería el de un protectorado ligado al Reino Unido por un tratado en virtud del cual se le concedería automáticamente la independencia. Cabía recordar que en 1962, al nombrarse una comisión constitucional para que redactase un informe, todos los partidos políticos habían considerado que no debían otorgarse al Jefe Supremo poderes absolutos comparables a los ejercidos por el Alto Comisionado de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia en materia de relaciones exteriores, defensa y seguridad interior. Los autores de la constitución se habían limitado a indicar que el Jefe Supremo sólo ejercería ciertos poderes. Los párrafos 30 y 62 del informe de 1963 eran explícitos a este respecto. El representante del Reino Unido sólo había citado los dos últimos apartados del párrafo 65, alterando así su sentido.

352. En tercer lugar, la delegación de poderes en materia de relaciones exteriores significaba que Basutolandia y el Reino Unido compartirían tales responsabilidades durante el período anterior a la independencia a fin de que el Territorio pudiese adquirir la experiencia necesaria. Esta división de poderes no significaba que se confiase al Primer Ministro la autoridad suprema de Jefe del Estado, como se desprendía de los párrafos 54, 56, 91, 94 y 97 del informe.

353. Para evitar todo malentendido añadió que deseaba precisar que cuando el Sr. Makotoko y él mismo se habían referido al gobierno de la minoría no habían querido impugnar en absoluto su legalidad; el hecho de que representaran a la oposición demostraba claramente que consideraban que aquél era el gobierno legal de Basutolandia.

354. Como la cuestión del traspaso de los poderes reservados en el momento de la independencia no se había analizado nunca en el contexto de un programa electoral, era indispensable proceder a nuevas elecciones. Como se señalaba en el párrafo 13 de la petición distribuida, era preciso mantener la unidad de la nación basuta, sobre todo en el momento en que se hallaba amenazada por un país vecino. En el párrafo 16 del mismo documento los peticionarios instaban a las Naciones Unidas a que persuadieran al Reino Unido a modificar su política actual y a aceptar, en particular, la propuesta de organizar inmediatamente elecciones bajo la vigilancia de observadores internacionales.

355. Para concluir el peticionario citó los párrafos 76, 79, 54, 56, 91, 94, 97, 30 y 62 del informe de 1963. Destacó nuevamente la negativa del Gobierno del Reino Unido, en 1964, a aceptar, como habían previsto los autores de la constitución, que, con algunas modificaciones, se traspasasen al Jefe de Estado de Basutolandia los poderes ejercidos por el Alto Comisionado en materia de relaciones exteriores, defensa y seguridad interior. Si el Reino Unido hubiese respondido a las aspiraciones unánimes de la población del Territorio, Basutolandia no tropezaría con las actuales dificultades.

356. En otra declaración, el Sr. Makotoko insistió en ciertos pasajes de una declaración formulada por el Secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, en la que éste había hecho un bosquejo histórico del actual conflicto constitucional en Basutolandia. En primer lugar, el desarrollo constitucional del Territorio había pasado, en efecto, por cinco etapas progresivas, y se habían fijado unos principios después de consultar a todos los dirigentes de la opinión pública basuta. Fue sólo en junio de 1966 cuando se soslayaron tales principios, y esa era la única razón del descontento que reinaba en el Territorio, y precisamente de lo que se trataba era de remediar esa situación. El segundo punto concernía a la promesa, hecha por los dirigentes basutos en 1964, de que en el momento de la independencia sólo se harían modificaciones mínimas. Pero era evidente que si el Gobierno del Reino Unido iba a conservar poderes reservados en materia de relaciones exteriores, seguridad interior y defensa, tal modificación, por mínima que fuese, no era secundaria en absoluto. No se podía aceptar la interpretación de que el término "mínimo" significase "secundario", pues no podía excluir el derecho del Territorio a disponer de los poderes reservados en forma que garantizara a la nación una protección máxima. En tercer lugar, todos los dirigentes de la opinión pública basuta habían aceptado en 1964 la estructura de la constitución previa a la independencia. Esa aceptación no podía extenderse automáticamente a la forma definitiva de la constitución que seguiría a la independencia, en 1966, pues no se habían resuelto aún algunas cuestiones nacionales sumamente importantes, como las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad.

357. La nación basuta debía poder manifestar su opinión en lo relativo a los poderes reservados. Si era cierto que había habido opinión unánime, convenía pre-

cisar sobre qué. El peticionario esperaba presentar a los miembros del Comité citas textuales de las declaraciones de todos los miembros del Gobierno actual que exigían las mismas condiciones que pedían los partidos de la oposición y por las que se acusaba a estos últimos de querer crear disturbios. En consecuencia, cuando se celebraron las elecciones, los dirigentes del Gobierno y del partido principal de la oposición estaban de acuerdo en que debían reiterarse al Jefe Supremo los poderes reservados.

358. Por lo demás, cabía destacar que el informe de la Comisión Constitucional, llamado en Basutolandia el Libro Verde, no había sido en realidad el documento jurídico en el que la Comisión y el Gobierno del Reino Unido habían fundado su acuerdo de Londres. El libro que sirvió de base a dicho acuerdo fue un proyecto de informe de la Comisión, que sólo adquirió fuerza jurídica después de haber sido modificado considerablemente por el Parlamento. Las modificaciones concernían principalmente a los poderes reservados y al estatuto del Jefe Supremo. Al enmendarse y legalizarse el documento, los funcionarios británicos de Basutolandia se abstuvieron de introducir las enmiendas al Libro. El peticionario dijo que por eso, al mencionar el Secretario de Estado para las Colonias en aquel momento ese documento, podía citar ciertos pasajes que contenían datos erróneos. Si se hubiese modificado debidamente el texto, resultaría claro que el pueblo basuto y su parlamento no tenían intención de que el Jefe Supremo se convirtiese en un monarca absoluto en el momento de la independencia. No se podían calificar de "leves", como lo hacía el Secretario de Estado para las Colonias, las modificaciones introducidas; eso revelaba diáfamanamente que había una maniobra contra el pueblo basuto.

359. Por lo que hacía a la cuestión de la delegación de poderes, los dirigentes basutos habían aceptado la idea de que los poderes reservados del régimen británico se traspasaran a los Ministros del Gobierno basuto, bajo el control del Jefe Supremo, encargado de velar por que tales poderes no se ejercieran con el fin de socavar la soberanía del Territorio. Actualmente, el Gobierno del Reino Unido decía que ese acuerdo equivalía a privar al Jefe Supremo del derecho a derivar su autoridad de dicho Gobierno. También en ese caso se trataba de una maniobra dirigida contra la nación basuta. Por otra parte, en la Conferencia de Londres, los dirigentes basutos habían pedido que se autorizase al Reino Unido a modificar la constitución, pero no la autoridad del Jefe Supremo durante el período anterior a la independencia, lo cual constituía una garantía de seguridad, pues en el curso de la historia de Basutolandia el Jefe Supremo era el llamado a salvar a la nación de graves desastres. En la actualidad parecía sostenerse que, según los dirigentes basutos, no debía accederse a lo que la nación había pedido, incluso después de la independencia.

360. Finalmente, destacó que en la conferencia de 1964 el Gobierno del Reino Unido se había comprometido a conceder la independencia a Basutolandia en condiciones de paz y de armonía. Por lo demás, hacía poco que, en Addis Abeba, el Comité Especial había aprobado una resolución encaminada al mismo fin. Basutolandia exigía que el Gobierno del Reino Unido respetase su promesa y la resolución del Comité. La mejor garantía de paz era la aplicación de esa resolución, según la cual la concesión de la independencia debía ajustarse a los deseos de la población; pero faltaba mucho

para que reinara la paz en Basutolandia. El envío de un regimiento británico no podía sustituir a otro medio mucho más seguro para mantener la paz, a saber, dejar que el pueblo basuto expresara sus aspiraciones sobre la forma de independencia que deseaba, mediante unas elecciones o un referéndum. Así no podría existir razón alguna de desacuerdo ni disturbio. El veredicto del referéndum sería respetado integralmente.

Declaraciones generales de los miembros

361. El representante del Reino Unido ofreció, a raíz de las declaraciones de los dos peticionarios en la sesión precedente, algunos detalles sobre las cuestiones constitucionales planteadas respecto a Basutolandia.

362. Indicó que en 1956 el Gobierno del Reino Unido había invitado al Consejo Nacional de Basutolandia a formular recomendaciones circunstanciadas acerca de los adelantos que podrían hacerse en la esfera constitucional. En 1962 y 1963, a petición del Consejo, el Jefe Supremo nombró una Comisión Constitucional que representaba a todos los partidos políticos principales. El informe de dicha Comisión fue examinado en 1964 en la conferencia constituyente efectuada en Londres, en la que participaron el Jefe Supremo y los dirigentes de todos los partidos políticos del Territorio. Todos los partidos, incluidos los representados por los actuales peticionarios, estuvieron unánimemente de acuerdo sobre el proyecto de constitución. Tres puntos del informe de la conferencia merecían mención: primero, que definía la posición del Jefe Supremo como la de Jefe de Estado constitucional; segundo, que la delegación de Basutolandia había declarado que encaraba el porvenir con confianza a pesar de las actuales dificultades económicas y que no pedía al Reino Unido que garantizara al Territorio una protección militar permanente después de concedida la independencia; que reconocía igualmente la necesidad de vivir en paz con Sudáfrica y se declaraba convencida de que esta última tenía un sentimiento recíproco para con Basutolandia; por último, que el Secretario de Estado para las Colonias se había comprometido a que si el pueblo de Basutolandia por resoluciones de ambas Cámaras de su Parlamento pedía la independencia, el Gobierno del Reino Unido procuraría hacer efectivo su deseo en el plazo mínimo de un año después de nuevas elecciones. Este compromiso se basaba en la hipótesis de que la situación de Basutolandia permitiría que el traspaso del poder se efectuara en paz y en orden. Todas las partes interesadas aceptaron ese procedimiento.

363. Las elecciones de abril de 1965, cuya validez habían impugnado algunos, se desarrollaron conforme a lo dispuesto en la nueva constitución y a las normas del sufragio universal de los adultos. Al inaugurarse la Conferencia Constituyente de 1966 el Basutoland National Party obtuvo 31 puestos; el Marema-Tlou Party, 1 puesto; el Basutoland Congress Party, 25 puestos; el Marema-Tlou Freedom Party 3 puestos; o sea 32 puestos para el Gobierno y 28 para la oposición. De las 11 personas designadas para el Senado por el Jefe Supremo, 8 se escogieron entre miembros de los partidos de oposición. Como había transcurrido un año desde las elecciones, una de las condiciones de que dependía el compromiso aceptado por el Secretario de Estado para las Colonias se había cumplido. La segunda condición consistía en que las resoluciones fueran aprobadas por las dos Cámaras del Parlamento de Basutolandia o, en caso de desacuerdo entre ellas, por la ma-

yoría de los que votaran en un referéndum; también se había cumplido esta condición. Por consiguiente, el Gobierno de Basutolandia pidió al Gobierno del Reino Unido se sirviera fijar la fecha del 4 de octubre de 1966 para la independencia.

364. Al inaugurarse la conferencia de junio de 1966, en la que se reunían delegados de todos los partidos políticos principales, la situación era la siguiente: la cuestión de la independencia había sido decidida en principio en 1964; las líneas generales de la constitución habían sido aceptadas también en 1964; las funciones del Jefe Supremo habían sido definidas y se había fijado la fecha para las elecciones. Por último, los partidos habían llegado a un acuerdo sobre el procedimiento que habría de seguirse después de las elecciones.

365. Refiriéndose a una de las observaciones del Sr. Kolisang respecto a los poderes reservados que concernía por tanto a las funciones del Jefe Supremo, el orador señaló que el párrafo 65 del informe de la Comisión Constitucional de 1963 tocaba, a su parecer, más de cerca este asunto que el párrafo 79 citado por el peticionario. Según este párrafo, cuyas recomendaciones se pusieron en práctica en la constitución de 1965, el Jefe Supremo era el representante de la Reina y estaba investido de los poderes de un monarca constitucional. Cabía recordar que todos los partidos habían aceptado esa cláusula de la constitución. En cuanto al traspaso de poderes relativos a la administración pública, las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad interna, el informe de la conferencia de 1964¹³ preveía en el párrafo 12 que estos poderes debían ser transferidos al Gobierno de Basutolandia, y no al Jefe Supremo. Por otra parte, a petición del Primer Ministro de Basutolandia se habían adoptado disposiciones en 1965 para transmitir al Gobierno del Territorio la responsabilidad de la seguridad interna y de las relaciones exteriores. Sería indudablemente difícil retirarle al Gobierno de Basutolandia unos poderes que le habían sido confiados incluso antes de la concesión de independencia. En el párrafo 11 del informe de la conferencia constituyente de 1964 se indicaba también que el Jefe Supremo sería el Jefe de Estado constitucional.

366. Aludió también a un discurso pronunciado ante la Cámara de los Lores el 21 de junio de 1966 por Lord Beswick en la que se refirió a una carta del Sr. Mokobi, líder de uno de los partidos de oposición, que opinaba que sería incompatible con el parecer de la mayoría de Basutolandia a menos que el Jefe del Estado constitucional sólo tuviese poderes limitados, y a un mensaje dirigido al Secretario de Estado para las Colonias por 17 de los 22 jefes principales de Basutolandia en el cual se declaraba que el Jefe Supremo era el Jefe del Estado, que debía ser un jefe constitucional y símbolo de la unidad nacional. Por las razones expuestas en el párrafo 15 del informe de 1966, el Gobierno del Reino Unido estimó que no estaba en condiciones de aceptar las propuestas de la oposición de Basutolandia, en vista de su incompatibilidad con los acuerdos concertados anteriormente y del riesgo que la división de responsabilidades podría acarrear.

367. En lo que tocaba a la cuestión de las relaciones entre Basutolandia y Sudáfrica — que manifiestamente provocaba mucha inquietud y acerca de la cual se había acusado implícitamente al Gobierno de Basutolandia

¹³ *Basutoland Constitutional Conference*, Cmnd. 2371 (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1964).

de que podría decidir, por razones que no fueron precisadas, ceder una parte del Territorio a la República de Sudáfrica o establecer con este país relaciones que no serían aceptables para el pueblo basuto — el representante del Reino Unido recordó que el propio Primer Ministro de Basutolandia había refutado de manera categórica tales acusaciones y se había declarado profundamente hostil al apartheid. Además, la constitución que había de entrar en vigor después de la independencia preveía que ninguna medida que pudiera afectar a la independencia y a la soberanía del nuevo Estado podría ser adoptada sin una decisión aprobada por una mayoría de los votantes en un referéndum. En otras palabras, al Gobierno de Lesuto no le sería posible transformar el país en un “bantustán” sin el apoyo de la mayoría del pueblo.

368. Por otra parte, el Gobierno de Basutolandia reconocía con espíritu realista que la convivencia con Sudáfrica era condición indispensable para la viabilidad económica del país; todos los partidos así lo habían reconocido y la necesidad de esta convivencia fue reafirmada en el informe de la conferencia de 1964, que había sido aprobado por todos los interesados. Además de esto, cabía añadir que el ser miembro del Commonwealth y Miembro de las Naciones Unidas constituía una garantía importante para la independencia de Basutolandia.

369. Por último, en cuanto a la organización de nuevas elecciones, que los peticionarios consideraban necesarias, el orador dijo que esa medida no tendría justificación; como nada indicaba que la situación en la opinión pública hubiese cambiado después de las anteriores elecciones, no veía motivo para suponer que una nueva consulta pudiese dar resultados diferentes. Las elecciones habían sido limpias y legales, y, hasta el momento en que se celebraron, los interesados estaban de acuerdo sobre los puntos planteados; si los dirigentes de los partidos a que pertenecían los peticionarios habían cambiado de opinión y habían vuelto a poner ciertas cuestiones sobre el tapete, fue después de las elecciones. El Parlamento de Basutolandia pidió la independencia, la fecha fijada para ella fue el día 4 de octubre y el nombre del país sería Lesuto. Por consiguiente, nada justificaba la celebración de nuevas elecciones antes de este acontecimiento.

370. Se esperaba, conforme manifestara el Secretario de Estado para las Colonias en una emisión radial al concluir la Conferencia, que todos los habitantes de Basutolandia colaborarían para bien de su patria. Añadió que el Gobierno de Basutolandia no se había enterado aún de lo dicho en ese debate y que indudablemente habría, más adelante, otra oportunidad para hacerse oír, si fuese menester.

371. En otra declaración, el representante del Reino Unido dijo que en su exposición de la víspera lo que sostenía principalmente era, primero, que la estructura esencial de la constitución, que debería regir, con un mínimo de cambios, después de la independencia, fue aceptada por todos en la Conferencia de 1964; y segundo, que se habían celebrado elecciones antes de la independencia, basadas en el sufragio universal de adultos, limpias y aceptadas por todos. Refiriéndose a las observaciones de los peticionarios sobre los poderes reservados, cuestión sobre la cual, según ellos, no había habido acuerdo ni solución en la conferencia de 1964, dijo que si bien la documentación citada acerca de este asunto se relacionaba con la constitución elaborada para

el período anterior a la independencia, y no al instrumento que regiría al país después de ese acontecimiento, como ya había dicho, la constitución anterior a la independencia, que fue aprobada por todos los interesados, fue preparada a petición concreta de la Comisión Constitucional de Basutolandia de forma que pudiera continuar vigente después de la independencia con un mínimo de modificaciones. De hecho la constitución anterior a la independencia preveía expresamente el traspaso de los poderes reservados a una autoridad de Basutolandia, puesto que, como se declaró en el informe constitucional de 1964, el representante del Gobierno del Reino Unido, del que seguían dependiendo las relaciones exteriores, la defensa y seguridad interna, tendría, con arreglo a la constitución, facultades para delegar una parte cualquiera de esos poderes en un ministro de Su Majestad designado por el Primer Ministro, y que podían imponerse condiciones a esta delegación de poderes; además, la delegación podría efectuarse sin perjuicio de la facultad que el representante del Gobierno del Reino Unido tenía de revocarla en todo momento.

372. Preguntó si era concebible que una vez delegados estos poderes, como efectivamente lo habían sido después de la entrada en vigor de la constitución de 1965, se proyectase traspasarlos al Jefe Supremo después de la independencia. Y, si podía, en tal caso, pensarse que no se hiciera la menor alusión al respecto en ninguno de los documentos presentados a la conferencia de 1966. De la misma manera, si, en opinión de todos los interesados, esos poderes debían ser confiados al Jefe Supremo, cabía dudar que fuese concebible que ello no se indicara en ninguno de los documentos pertinentes.

373. En cuanto a los poderes del Jefe Supremo en su calidad de Jefe de Estado, el orador señaló a la atención del Comité el capítulo 3 del informe de la Comisión Constitucional de 1963, que versaba exclusivamente sobre la cuestión del Jefe de Estado. Como lo declaró la propia Comisión, la definición de los poderes del Jefe Supremo había sido la parte más delicada de sus trabajos; la conclusión de la Comisión fue que tales poderes debían ser cuidadosamente definidos. La cita completa sobre esta cuestión figuraba en el acta taquigráfica de la 457a. sesión del Comité Especial. Añadió que dudaba que las actas de la conferencia de Londres de 1964 permitieran deducir las conclusiones generales a que habían llegado los peticionarios al tratar el tema. Por el contrario, lo que sí era cierto, era que, en opinión de un miembro eminente del Basutoland Congress Party, el Sr. Ramoreboli, los poderes del Jefe Supremo no podían ser otros que los que se precisaban en el informe y que se derivaban de un principio aceptado por todos, el de la monarquía constitucional. Para la organización de un poder de esa naturaleza, el señor Ramoreboli consideraba normal referirse al ejemplo del Reino Unido, cuya experiencia monárquica databa de mil años; del examen de este régimen había llegado a la conclusión de que para que la monarquía pudiera subsistir era preciso que el monarca se mantuviera ajeno a las controversias políticas, que reinara sin gobernar, o sea que estuviera investido de los poderes de un monarca constitucional.

374. En cuanto a la organización de nuevas elecciones, señaló que cuando el 4 de diciembre de 1963 se había tratado de someter de nuevo a la aprobación del pueblo el informe de la Comisión Constitucional, el

Sr. Khaketla, miembro del Basutoland Congress Party, y el Sr. Kolisang, no habían impugnado la validez de las opiniones expresadas en el informe, estimando, como declararon por escrito, que aquélla era una base aceptable de las negociaciones para mejorar la constitución vigente entonces en Basutolandia. El Sr. Khaketla declaró también que sus mandatarios estimaban que el informe de la Comisión Constitucional de Basutolandia reflejaba fielmente las opiniones que habían expresado ante la Comisión cuando fueron consultados en 1962, que la aceptaban en su totalidad y deseaban su aprobación sin pérdida de tiempo por el Consejo Nacional de Basutolandia y que no estaban de acuerdo con los que deseaban que el informe fuera sometido de nuevo a la aprobación de la población, ya que en su opinión tal informe constituía la expresión de los sentimientos sinceros de los basutos. Añadió que, como hubo de señalarlo él mismo en la sesión precedente, la constitución que debía entrar en vigor después de la independencia reproducía casi exactamente la que fue elaborada por la Comisión Constitucional de 1962-1963, que fuera aprobada por las conferencias constituyentes ulteriores, especialmente la de 1964, en la cual habían participado los representantes de todos los partidos políticos de Basutolandia y el Jefe Supremo de este país.

375. Además, si la cuestión de saber si los poderes reservados habrían de ser confiados al Jefe Supremo o a los ministros del Gobierno basuto una vez llegada la independencia no fue resuelta en la Conferencia de 1964, era inconcebible que no hubiese sido una de las cuestiones planteadas en las elecciones de 1965 y los propios peticionarios habían dicho que no lo había sido. El electorado tenía plena conciencia de los problemas que planteaba la independencia; pero el de los poderes reservados estaba ya resuelto, puesto que todos los interesados habían convenido en que los poderes del Jefe Supremo debían ser los de un monarca constitucional. Si la cuestión de la atribución de los poderes reservados no hubiera estado resuelta en principio en la Conferencia de 1964, era inconcebible que no fuera uno de los problemas que debían decidirse en las elecciones. Unicamente después de la consulta popular volvieron los dos partidos de los peticionarios a plantear la cuestión de los poderes reservados. Hasta el momento de conocerse los resultados de las elecciones todos los interesados estaban de acuerdo en el plan laborioso y cuidadosamente preparado para llevar a Basutolandia a la independencia.

376. El representante del Irak, refiriéndose al párrafo 2 de la resolución A/AC.109/178, aprobada por el Comité Especial el 9 de junio de 1966 y en la cual el Comité instó a la Potencia Administradora a que, en cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, garantizara que la independencia que se otorgase a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se basara en los deseos libremente expresados de todos los habitantes, señaló que se podría decir que el Comité pensaba quizá en nuevas elecciones cuando hablaba de "deseos libremente expresados". A su juicio tal vez a ello obedecía el que los peticionarios aludieran a esa posibilidad. El representante del Irak se preguntaba si, en opinión del representante del Reino Unido, había alguna contradicción entre lo dicho por los peticionarios la víspera y lo que el Comité Especial decía, en cuanto al fondo, en la resolución que acababa de citar y en la cual, a su parecer, cabía fundarse para preconizar nuevas elecciones.

377. El representante del Uruguay manifestó que el representante del Reino Unido había dado al Comité informaciones de las cuales se desprendía que la independencia que Basutolandia estaba a punto de lograr, se había preparado debidamente y con el apoyo de todos los interesados.

378. Le complacía que el Gobierno salido de las elecciones de 1965 encarnase los deseos de la mayoría, y de una mayoría consciente. Añadió que al Comité le había sido muy grato escuchar al representante del Reino Unido confirmar que Basutolandia alcanzaría su independencia el 4 de octubre. Ese país, que había de nacer no sin dolor, ocuparía su lugar entre las naciones soberanas para desempeñar su papel en el mundo.

379. Estimaba que cabía felicitarse en particular de que la independencia de Basutolandia sería una independencia verdaderamente constitucional pues la declaración del representante del Reino Unido indicaba que las tres partes se habían puesto de acuerdo sobre las modalidades de esa independencia y sobre la constitución que regiría el nuevo Estado.

380. Por lo que hacía a las disposiciones relativas a los poderes constitucionales reservados al Jefe Supremo, si bien el orador no podía suscribirlas, dadas sus convicciones republicanas, respetaba en ellas su elección por el pueblo en ejercicio de su derecho fundamental a la libre determinación.

381. El representante de la República Unida de Tanzania dijo, respecto a la declaración del representante del Uruguay, que los países de América Latina habían dado a Africa muchos ejemplos provechosos, sobre todo en su lucha para conquistar la independencia. Sin embargo, el orador no creía que la democracia estuviese penetrando en Africa, cuya historia se caracterizaba constantemente por derramamientos de sangre. A su juicio Africa estaba viviendo un proceso de descolonización y lo que allí ocurría no era una introducción verdadera de la democracia en el continente, sino una restitución a los africanos de los derechos de que habían sido despojados por las Potencias coloniales. El hecho de que los peticionarios africanos tuvieran que acudir ante el Comité Especial era motivo de aflicción pues suponía que Africa seguía oprimida y la libertad del hombre en el mundo seguía coartada. A los africanos les interesaba ante todo la índole de la independencia, no la noción de independencia en sí. Por ejemplo, el propio Ian Smith había proclamado su independencia; sin embargo, no se podría reconocer esa independencia porque era contraria a los intereses africanos. Cabía decir lo mismo de Sudáfrica: la independencia de ese país no era verdadera y estaba en poder de una minoría que explotaba al resto de la población. La delegación de Tanzania se interesaba pues, esencialmente, en la índole de la independencia; estimaba que debían tenerse en cuenta los testimonios de los peticionarios, pese a ciertas contradicciones evidentes, pues éstos representaban a la población y hablaban en su nombre. En cuanto a las contradicciones que podrían destacarse en las declaraciones de las Potencias administradoras, estimaba interesante citar, como ejemplo, la posición adoptada por el Gobierno del Reino Unido en lo concerniente a Rhodesia del Sur y la actitud sensiblemente diferente que adoptaba en el caso de Adén, aun cuando los grupos de población interesados eran análogos. Añadió que, por lo que hacía a las seguridades dadas por el Gobierno del Reino Unido, la delegación de Tanzania

recordaba que dicho Gobierno había dado muchas veces seguridades que jamás se habían convertido en hechos.

382. En lo concerniente a Basutolandia, afirmó que el asunto interesaba a la Potencia Administradora, y que los peticionarios habían subrayado ya lo que convenía hacer. Por eso estimaba que, si bien se debían pesar con atención las declaraciones de la Potencia Administradora, también era preciso examinar escrupulosamente las de los peticionarios, en interés del pueblo africano de Basutolandia.

383. A la delegación de Tanzania le extrañaba que se pudiera alegar que la cuestión de los poderes reservados había sido resuelta, cuando la constitución de 1964 dejaba esos poderes en manos de los representantes del Gobierno del Reino Unido en el Territorio. De las declaraciones de los peticionarios se deducía claramente que la mayoría del pueblo basuto rechazaba el argumento de que la cuestión estuviera resuelta. Después de todo, los poderes relacionados con la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad interna eran demasiado importantes para imaginar que se hubiera podido tomar una decisión sobre ellos sin examinar a fondo la cuestión en una conferencia constituyente. Era además significativo que hasta el Jefe Supremo, quien al parecer había colaborado siempre estrechamente con los representantes del Gobierno del Reino Unido en el Territorio, no estuviese de acuerdo sobre este punto con el Reino Unido. Por ello el representante de Tanzania estimaba que la mejor forma de resolver la cuestión era consultar al pueblo basuto; en interés de la paz y del orden, se le debería permitir pronunciarse sobre la cuestión por medio de unas elecciones.

384. Había otra cuestión importante: la delegación de poderes. Los basutos no deseaban que el Jefe Supremo se convirtiera en un soberano absoluto, sino que pudiera sólo dar su parecer sobre la forma en que se ejercerían esos poderes. En esencia, sería preciso que el Jefe del Estado pudiera delegar los poderes relacionados con la defensa, la seguridad interna y las relaciones exteriores en sus ministros, de la misma manera que el representante del Reino Unido en Basutolandia podía delegar sus poderes, según se disponía en la constitución de 1965. Como la constitución no decidía el problema y como en el momento de la independencia el Jefe Supremo de Basutolandia pasaría a ser el Jefe del Estado, sería normal, en opinión de la delegación de Tanzania, que los poderes ejercidos hasta ese momento por el representante del Reino Unido pasaran al Jefe del Estado, que los delegaría en sus ministros.

385. El Comité Especial no debía olvidar que tenía que velar ante todo por los intereses del pueblo basuto. Estos intereses exigían que el Territorio alcanzara la independencia pacífica y ordenadamente. Por esta razón, si ciertas decisiones tomadas en la última conferencia constituyente podían provocar desórdenes, el Reino Unido debería organizar nuevas elecciones para permitir que los basutos se pronunciaran sobre la forma en que debían ejercerse los poderes reservados después de la independencia.

386. El orador instó a los basutos a la unión para demostrar al mundo que, aun cuando lograsen la independencia en circunstancias difíciles, serían capaces de superar sus dificultades.

387. El representante del Uruguay subrayó que no había divergencia entre su opinión y la del represen-

tante de la República Unida de Tanzania. El concepto de la democracia era una cosa en sí, el de la independencia era otra cosa, pero lo cierto era que todos los pueblos debían pagar determinado precio por su libertad. En su lucha contra muchas dominaciones América Latina también había conocido los derramamientos de sangre; por ello comprendía el problema que se planteaban África y Asia. La solidaridad de los representantes latinoamericanos con los de África y de Asia en el seno del Comité Especial tenía en cierto modo un carácter afectivo pues todos ellos hablaban la misma lengua de la democracia. La lucha que África estaba librando tenía resonancias comunes con la que había librado América Latina.

388. El representante de Malí opinó que el problema constitucional planteado por la Potencia Administradora era menos importante que las relaciones que deberían existir entre Sudáfrica y Basutolandia y la garantía ofrecida a ese Territorio para salvaguardar su integridad frente a aquel país. Declaró que le complacería que el representante del Reino Unido explicase las medidas que su Gobierno había adoptado o se proponía adoptar para garantizar la independencia de Basutolandia. Añadió que el representante de la Potencia Administradora había manifestado que el Presidente del Gobierno actual de Basutolandia daba pruebas de realismo al proponerse cooperar muy estrechamente con el Gobierno de Sudáfrica, pero que, en el párrafo 43 del documento A/AC.109/L.273, se había afirmado que "la gente que vive en Basutolandia debe poder salir libremente del país y regresar a él". Preguntó si eso significaba que Basutolandia se hallaba bajo la dependencia del Gobierno sudafricano y que éste podía a su antojo autorizar la salida de personas o negarles la entrada en su territorio, y si ésas eran las condiciones en que el Gobierno del Reino Unido deseaba conceder la independencia a Basutolandia.

389. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que su delegación había estudiado con atención las peticiones sometidas al Comité Especial, y había escuchado con sumo interés las declaraciones de los peticionarios. Estos habían destacado en especial que la política del Reino Unido, como Potencia Administradora, se oponía a la verdadera independencia, unidad e integridad territorial de Basutolandia. La prueba del desacuerdo del pueblo basuto con la política de la Potencia Administradora estaba en las muchas reuniones de la población en todo el Territorio para protestar contra la política del Reino Unido. Por otra parte, el representante del Reino Unido había tratado de dar la impresión de que la política de la Potencia Administradora estaba en armonía con los intereses de Basutolandia. En tal caso, no se comprendía qué objeto tenían tales reuniones de la población. La política británica en Basutolandia, así como en otras colonias, sólo se desarrollaba en interés de la Potencia Administradora y de los monopolios británicos. La Potencia Administradora había condenado a Basutolandia a hacer frente a una situación económica y a unas condiciones sociales sumamente difíciles. El representante del Reino Unido había dicho al Comité que las elecciones del 29 de abril de 1965 habían sido democráticas. Se podía comprobar, sin embargo, que la República de Sudáfrica se había inmiscuido directamente en el curso y en los resultados de aquellas elecciones. Por ejemplo, los peticionarios citaron casos de asistencia financiera directa de la República de Sudáfrica y de la Re-

pública Federal de Alemania. Además, Sudáfrica había ejercido presiones económicas sobre los electores y había recurrido al chantaje y a las amenazas. Si se tenía presente que tal presión y tal chantaje se habían ejercido sobre el 43% de la población activa del país, o sea la cifra de nacionales basutos que trabajaban en la República de Sudáfrica, se veía claramente la importancia de dicho chantaje electoral. En vista del voto ilegal de personas residentes en la República de Sudáfrica y de la falsificación de las cédulas de votación, quedaba totalmente desacreditada la tentativa del Reino Unido de presentar como elecciones democráticas las elecciones de 1965. Por lo demás, esas elecciones no se habían ajustado a uno de los principios de la Declaración sobre la concesión de la independencia, a saber, el principio de "un voto por persona". Así pues, el partido que logró el 41,6% de los votos gracias a actividades antidemocráticas, obtuvo en realidad 31 de los 60 puestos del Parlamento, esto es, casi el 52% del total de los puestos. Este margen mostraba claramente que no habían sido limpias las elecciones y que se habían desarrollado en contravención con las normas exigidas por las Naciones Unidas en materia de elecciones en los territorios coloniales. No podía considerarse democrática una situación en la cual quienes habían alcanzado la mayoría en las elecciones no estaban representados en el Gobierno. Era evidente que el Reino Unido, al organizar las elecciones, perseguía con obstinación una política que impedía al pueblo de Basutolandia expresar libremente su voluntad y decidir su porvenir. El Gobierno del Reino Unido quería ante todo satisfacer los intereses de los capitalistas británicos en el África meridional. El Comité Especial debía analizar muy seriamente la situación en Basutolandia, y tomar todas las medidas necesarias para asegurar el respeto de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La delegación de la Unión Soviética apoyaría toda decisión del Comité a tal efecto.

G. OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

390. En la 458a. sesión, celebrada el 8 de julio de 1966, el Presidente, accediendo al pedido de varias delegaciones, hizo una declaración, para exponer el consenso expresado en el Comité Especial, concebida en la forma siguiente:

"En el curso de los debates, los miembros del Comité Especial expresaron su profunda preocupación ante el giro de la situación en Basutolandia y todos manifestaron el deseo de que el Territorio alcanzara sin demora la independencia. Varios miembros del Comité hicieron votos porque todos los partidos políticos del Territorio se unieran para realizar los objetivos comunes, ya que sólo aunando sus fuerzas podrían resolver los problemas de Basutolandia. En opinión general, la independencia de Basutolandia debería fundarse en los principios formulados en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución relativa a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia (A/AC.109/178), aprobada por el Comité Especial en su 439a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1966 en Addis Abeba. Por último, varias delegaciones expresaron la esperanza de que la integridad territorial de Basutolandia fuera garantizada."

391. En la misma sesión el Comité Especial aprobó el consenso sin objeción.

392. El representante del Reino Unido se felicitó de que el Presidente hubiera decidido proceder por consenso. Sin embargo, como no había tenido tiempo de consultar a su Gobierno sobre este punto, tenía que formular una reserva general sobre los términos de la declaración del Presidente. Por otra parte, como se trataba en cierto modo de cuestiones de la competencia interna de Basutolandia — el futuro Estado independiente de Lesuto — también quería formular una reserva general en nombre del Gobierno de Basutolandia.

393. Respecto a la mención del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución A/AC.109/178, según el cual la independencia debería fundarse en la voluntad libremente expresada de toda la población, conforme a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, subrayó que en opinión del Reino Unido las elecciones celebradas en el Territorio cumplían ese requisito.

394. En cuanto a la última frase de la declaración del Presidente, o sea, la relativa a la garantía, indicó que, en vista de que ignoraba quién la daría, y en qué forma, no podía aceptar ningún compromiso a ese respecto en nombre de su Gobierno.

395. La representante de los Estados Unidos de América dijo que su delegación se alegraba de que el Comité hubiera podido llegar a un consenso, pero deseaba formular reservas sobre la parte de la declaración del Presidente relativa al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución A/AC.109/178, por estimar que el pueblo basuto se había pronunciado ya sobre esa cuestión en las recientes elecciones.

396. El representante de Malí manifestó que su delegación se asociaba complacida al consenso que el Presidente acababa de exponer. Sin embargo, no comprendía la posición de ciertas delegaciones acerca del párrafo 2 de la resolución A/AC.109/178, aprobada en Addis Abeba. Dado que los peticionarios habían dicho que abandonaron la conferencia de Londres porque en ella no se había decidido claramente el destino de los poderes denominados reservados, era evidente que en tales circunstancias la independencia no estaría fundada en la voluntad libremente expresada de toda la población.

397. En cuanto a la garantía sobre la integridad territorial de Basutolandia, no le cabía duda alguna de que correspondía al Reino Unido, en su calidad de Potencia Administradora, garantizar la integridad del Territorio frente a la amenaza que le planteaba Sudáfrica.

398. El representante de Australia recordó que su delegación había votado a favor de la resolución A/AC.109/178, e indicó que en cuanto al párrafo 2 de la parte dispositiva de esa resolución, su posición era análoga a la de los Estados Unidos. En opinión de Australia la independencia que en breve debía alcanzar Basutolandia se fundaba efectivamente en la voluntad libremente expresada de la población, en el sentido en que Australia interpretaba dicho párrafo.

H. EXAMEN DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ SOBRE BASUTOLANDIA, BECHUANIA Y SWAZILANDIA

399. En sus sesiones 466a. y 467a., el Comité Especial examinó el informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia creado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité en su 439a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1966.

400. Durante su examen del informe del Subcomité, el Comité Especial tuvo también a la vista una carta que le había dirigido el Presidente del Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica (A/AC.109/204). En la carta se señalaba un memorando que se había recibido del Sr. Matthew Nkoana, del Pan-Africanist Congress of South Africa, sobre la detención en Basutolandia del Sr. John Nyati Pokela, miembro de dicho partido.

Declaraciones hechas por los miembros del Comité Especial acerca del informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

401. El representante de Bulgaria (Relator del Subcomité) explicó, al introducir el informe, que los miembros del Subcomité tenían conciencia de la complejidad de la cuestión y de su carácter sin precedentes en las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, los miembros del Subcomité comprendían que no disponían de tiempo suficiente para llevar a cabo un estudio profundo y que tenían que formular sus recomendaciones lo antes posible. Por ese motivo el Subcomité se había esforzado por sugerir al Comité Especial determinadas medidas a tono con la urgencia de la situación y que podían aplicarse inmediatamente, a fin de contrarrestar los objetivos declarados del régimen de Sudáfrica, que pretendía absorber esos Territorios e inmiscuirse en sus asuntos internos.

402. Ante todo, dada la situación precaria en que se encontraban los tres Territorios en momentos en que dos de ellos estaban a punto de obtener la independencia, el Subcomité recomendaba al Comité que pidiera a la Potencia Administradora la adopción de medidas que les permitieran lograr la independencia en la forma prescrita en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

403. En segundo término, el Subcomité pensaba que el Comité Especial debería recomendar una vez más a la Asamblea General que hiciera de nuevo y solemnemente una advertencia a la República de Sudáfrica a fin de que ésta supiera que toda tentativa de vulnerar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios sería considerada como un acto de agresión y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, con todas las consecuencias inherentes, inclusive el recurso al Consejo de Seguridad. La Asamblea General debería igualmente señalar a la atención del Consejo de Seguridad esta cuestión. Además, dada la actitud benevolente demostrada por ciertas Potencias con respecto al régimen sudafricano del apartheid y la ayuda que le habían proporcionado, la Asamblea General debería hacer un llamamiento a todos los Estados para que se abstuvieran de cualquier medida que pudiera alentar los designios de Sudáfrica.

404. El Comité Especial debería celebrar consultas con la Organización de la Unidad Africana, que tenía una particular responsabilidad en lo relacionado con los problemas africanos.

405. Finalmente, el Subcomité sugería que la Asamblea General diese prioridad a este asunto a fin de tomar una decisión antes de la inminente concesión de la independencia a dos de los tres Territorios.

406. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se encontraban en una inquietante situación, debida a la presencia amenazadora de Sudáfrica y a la actitud

colonial del Gobierno del Reino Unido, que se había contentado con hacer de los tres Territorios fuentes de mano de obra barata para las minas de oro y otras empresas de los monopolios financieros que actuaban en Sudáfrica. En el momento en que el régimen colonial estaba a punto de desaparecer, la situación económica de los Territorios causaba graves preocupaciones. Era cierto que la geografía tendía a hacerlos dependientes de la economía sudafricana, pero el Comité había de reconocer que su debilidad económica se debía principalmente a las prácticas coloniales británicas. La población africana había sido despojada de la mayor parte de las tierras cultivables, que pertenecían ahora a colonos y a empresas extranjeras.

407. Los peticionarios a quienes había escuchado el Comité durante sus sesiones celebradas en Africa habían declarado que las autoridades británicas habían permitido a los sudafricanos desempeñar un importante papel en la administración pública de los Territorios (agentes del apartheid controlaban principalmente la policía); esas autoridades habían querido también, frente a la marea del nacionalismo africano, salvaguardar sus posesiones sentando las bases del neocolonialismo.

408. En el plano político, las autoridades coloniales habían colaborado con los racistas sudafricanos para subyugar los movimientos de liberación nacional y falsear las elecciones (los peticionarios a quienes había escuchado el Comité habían declarado que el régimen sudafricano había obligado a los trabajadores africanos a cruzar la frontera para votar por determinados candidatos). Pese a estas maniobras, los partidos de oposición, que exigían una independencia verdadera, habían obtenido la mayoría de los votos, pero seguían constituyendo "la oposición".

409. La Asamblea General, en diversas resoluciones y principalmente en la resolución 2063 (XX), había señalado la grave amenaza que planteaba el régimen sudafricano del apartheid para la vida económica, la soberanía y la integridad territorial de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia. En su resolución 1954 (XVIII) había advertido a Sudáfrica que "toda tentativa de anexionar estos tres Territorios o de infringir de cualquier modo su integridad territorial" sería "considerada como un acto de agresión". Por su parte, la Organización de la Unidad Africana había pedido que se tomaran medidas para protegerlos.

410. La situación no había hecho sino agravarse recientemente. Las recomendaciones del Subcomité estaban inspiradas en la conciencia de los peligros que acababa de señalar el orador. La delegación de Tanzania deseaba que se aprobara sin reservas el informe y que las recomendaciones que en él se hacían sirvieran de base para una plena aplicación de la histórica Declaración formulada en la resolución 1514 (XV). El Gobierno del Reino Unido debía cooperar con las Naciones Unidas para que se observaran las disposiciones de dicha resolución y para que las poblaciones de los tres Territorios no fueran víctimas del racismo y de la explotación del hombre por el hombre.

411. El Presidente del Subcomité dijo que aun cuando todos los miembros de éste habían estado de acuerdo sobre el fondo de la cuestión, a saber, que los tres Territorios deberían gozar de una soberanía establecida sobre bases sólidas, y no correr el riesgo de verse sometidos al yugo del apartheid por sus peligrosos vecinos, no era menos cierto que se habían manifestado diver-

gencias de opinión: algunos habían considerado principalmente que el Subcomité no tenía competencia para formular recomendaciones sobre la conducta política de la Potencia Administradora. Sin embargo, el Subcomité se había mostrado unánime en condenar el sistema racista del apartheid y en prever soluciones prácticas que pudieran aplicarse durante el corto período que separaba la creación del Subcomité de la fecha en que éste debía presentar su informe.

412. Como dos de los Territorios debían obtener en plazo breve la independencia — Bechuania el 30 de septiembre y Basutolandia el 4 de octubre — no era posible invitar a la Potencia Administradora a que tomase medidas a largo plazo. Tampoco cabía pensar en retardar el proceso de obtención de la independencia para que dicha Potencia pudiese dar nuevas garantías.

413. Era posible que la labor del Subcomité, tal como se reflejaba en el informe, fuese imperfecta, pero era importante darse prisa, bajo la presión de las circunstancias.

414. El representante del Reino Unido dijo que no pensaba abordar por el momento las cuestiones planteadas por el representante de Tanzania, pero en nombre de su delegación rechazaba categóricamente las afirmaciones de dicho representante.

415. Pasando al fondo del informe, dijo que abrigaba las más graves dudas en cuanto a la oportunidad de aprobarlo en la actual coyuntura. No creía que el Subcomité hubiera tenido suficientemente en cuenta la situación del momento ni lo realizado hasta la fecha. Tampoco creía que los procedimientos propuestos fueran los más convenientes, dada la situación. En particular, cabía afirmar que en el informe se había pasado por alto recabar la opinión de los gobiernos interesados antes de aplicar medidas.

416. La economía de los Territorios y la de Sudáfrica eran inevitablemente interdependientes. Además, los Gobiernos de Basutolandia y Bechuania tenían plena conciencia de la necesidad de establecer una distinción entre interdependencia económica e interdependencia política. Como ejemplo, el representante del Reino Unido citó declaraciones de los primeros ministros de ambos Territorios. El Primer Ministro de Basutolandia había dicho el 27 de junio lo siguiente:

“Lesuto está íntimamente vinculada con Sudáfrica, desde el punto de vista geográfico, histórico y económico. Al mismo tiempo, sabemos muy bien que somos parte de la nueva África... No nos inmiscuiremos en los asuntos de Sudáfrica y esperamos que Sudáfrica no se inmiscuirá en los nuestros; pero igual importancia tiene nuestra decisión de impedir que Basutolandia sea utilizada como instrumento de quienes tienen que proteger intereses ajenos a los intereses inmediatos de Basutolandia. No se trata de estrechez de miras: es una cuestión de elemental buen sentido.”

El Dr. Seretse Khama, tras asumir el cargo de Primer Ministro de Bechuania el 3 de marzo de 1965, había afirmado que su país continuaría manteniendo relaciones comerciales con Sudáfrica en tanto ello resultase beneficioso para Bechuania y que con los países que seguían políticas divergentes les era posible mantener buenas relaciones comerciales.

417. El representante del Reino Unido advirtió que, como se reflejaba en el párrafo 8 del informe, ciertos

miembros del Subcomité habían considerado que el actual Gobierno de Basutolandia no gozaba de la confianza de la mayoría de la población, y recordó a este respecto que en Basutolandia y Bechuania se habían celebrado recientemente elecciones por sufragio universal de los adultos. Por lo que hacía a Basutolandia, el Comité había tratado de manera exhaustiva esta cuestión en su 457a. sesión, como podía comprobarse en el acta correspondiente. Aunque el partido que estaba en el poder no había conseguido la mayoría absoluta en las elecciones, obtuvo más escaños que los otros dos partidos juntos. Era esta una situación que podía producirse en un régimen democrático, y no había que olvidar que en las elecciones se había llegado a un acuerdo sobre lo esencial, a saber, que el país debía reclamar la independencia. La obtendría el 4 de octubre de 1966.

418. Con respecto a Bechuania, en marzo de 1965 se habían celebrado elecciones por sufragio universal de los adultos. El Bechuanaland People's Party había obtenido el 80% de los escaños, habiendo participado en la votación el 75% de los electores. En consecuencia, el Gobierno de dicho Territorio gozaba de la confianza total de la población.

419. Los dos Territorios de Basutolandia y Bechuania estaban dotados de Gobiernos democráticamente elegidos por sufragio universal de los adultos según la voluntad libremente expresada de su población. Los Gobiernos de ambos Territorios habían acordado con el Reino Unido las condiciones de su acceso a la independencia, y nadie podía pretender que tales condiciones no hubieran sido establecidas de conformidad con los deseos de los habitantes. Los mismos principios serían aplicados a Swazilandia.

420. Por consiguiente, la delegación del Reino Unido rechazaba las afirmaciones contenidas implícitamente en el párrafo 8 del informe del Subcomité y en las recomendaciones que figuraban en los apartados i) y ii) del inciso a) del párrafo 14. A juicio del representante del Reino Unido, estas dos recomendaciones eran enteramente superfluas. El Gobierno del Reino Unido había cumplido con sus obligaciones y llevado a Bechuania y Basutolandia al umbral de la independencia.

421. Se decía en el apartado iii) del inciso a) del párrafo 14, que el Gobierno del Reino Unido debería salvaguardar la integridad territorial y la soberanía de los Territorios contra las injerencias de Sudáfrica. La situación a este respecto era clara: hasta el logro de su independencia, la integridad territorial y la soberanía de estos Territorios dependían del Gobierno británico y de los Gobiernos de los Territorios interesados. Después de la independencia, incumbía a estos últimos asumir ellos mismos esa tarea; si una vez lograda la independencia, deseaban obtener la ayuda de las Naciones Unidas, deberían iniciar por cuenta propia las negociaciones necesarias para lograr tal ayuda. Al Gobierno del Reino Unido no se le había pedido que concluyera acuerdos de defensa con Basutolandia y Bechuania después de hacerse éstos independientes.

422. En todo caso, la ayuda económica del Reino Unido continuaría después de la independencia, y vendría a añadirse a la que prestaban las Naciones Unidas. Durante el período 1946-1966 los Territorios habían recibido 42 millones de libras, aproximadamente, en forma de consignaciones presupuestarias, préstamos y subsidios con cargo al Colonial Development Welfare Fund. Desde la publicación del informe Morse en 1961,

la ayuda concedida había alcanzado la suma de 33 millones de libras en cinco años. Además, la Commonwealth Development Corporation había invertido cerca de 22 millones de libras en estos Territorios. Era seguro que esta ayuda había disminuido la dependencia económica de los mismos con respecto a Sudáfrica, y ése era el resultado que se buscaba. Por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones de carne de Bechuania iban hacia el norte; el mineral de hierro de Swazilandia era vendido al Japón; su amianto y su pasta de papel a Europa, y su azúcar era comprado por el Reino Unido en virtud del *Commonwealth Sugar Agreement* en condiciones muy ventajosas para el Territorio. Pero cabía dudar de la conveniencia de desviar los productos de estos Territorios de un mercado muy próspero y cercano para exportarlos a otras regiones menos prósperas y más alejadas. Según había dicho ya el orador, y tal como se recomendaba en el informe, la interdependencia económica seguiría siendo grande.

423. El representante del Reino Unido pasó después a la recomendación que se hacía en el inciso c) del párrafo 14. A ese respecto, señaló que los Gobiernos de los Territorios deberían tener la plena responsabilidad de participar en toda consulta entre el Comité Especial y la Organización de la Unidad Africana.

424. El Gobierno del Reino Unido deseaba fervientemente que se respetara la independencia que iban a obtener los Territorios y que éstos ocuparan como Estados el puesto que les había de corresponder en la comunidad internacional. Dos de ellos pedirían su admisión como Miembros de las Naciones Unidas, y la Conferencia del Commonwealth había aceptado que esos países pasaran a ser miembros de éste.

425. Pero, en opinión de la delegación del Reino Unido, era esencial trabajar en estrecha relación con los Gobiernos, por lo cual dicha delegación tenía graves reservas que formular acerca del procedimiento propuesto en el inciso d) del párrafo 14 del informe. Cabía dudar de la utilidad de actuar con precipitación en un caso que como éste tocaba a los asuntos de Estados que estaban en vísperas de lograr la independencia, e incluso antes que sus Gobiernos hubieran tenido la posibilidad de exponer sus puntos de vista.

426. Si se aprobaba el informe sin someterlo a votación, la delegación del Reino Unido se vería obligada a emitir las reservas más enérgicas en el sentido de la declaración que acababa de hacer. Si el informe se sometía a votación, la delegación del Reino Unido se abstendría por las razones ya indicadas.

427. El representante del Uruguay deseaba recordar que el informe reflejaba la opinión general del Subcomité, lo que no significaba que no se hubieran manifestado divergencias de puntos de vista sobre cuestiones secundarias.

428. Una de las cuestiones de las cuales había tenido que ocuparse el Subcomité había sido la de hallar medidas que garantizaran la independencia de los tres Territorios en una región del sur de Africa en la cual ocupaban el poder minorías no africanas. Los proyectos de recomendaciones iniciales contenían disposiciones que, en opinión de algunos miembros del Subcomité, excedían las atribuciones de este órgano. El Subcomité no podía por cierto tratar cuestiones que no le había encomendado el Comité que lo había designado.

429. El Subcomité no había descuidado el estudio de las diversas cuestiones, incluso las que se referían

a la responsabilidad de la Potencia Administradora, tanto durante el período previo a la concesión de la independencia como en el que le había de seguir. Por lo que se refería a las partes del párrafo 14 que fijaban normas a la Potencia Administradora, el representante del Uruguay estimaba que a pocas semanas de la independencia cualquier declaración sobre medidas democráticas eventuales relacionadas con las elecciones que ya se habían celebrado y respecto de Gobiernos que se preparaban para ejercer el poder dentro de pocas semanas, parecería fuera de lugar e ineficaz. O bien era menester recomendar que los Territorios no adquiriesen la independencia en las fechas previstas, lo que provocaría un desacuerdo respecto de las facultades de la Autoridad Administradora sobre la constitución que debía entrar en vigor dentro de algunos meses, o bien había que aceptar que esos pueblos sometidos se convirtieran finalmente en miembros de la comunidad soberana de naciones en las fechas establecidas y dejarlos que aportasen las modificaciones necesarias a los sistemas que habían existido en el pasado.

430. Para la delegación uruguaya la opción era clara: no se debía aplazar jamás la fecha de la independencia de un pueblo colonial que había de ser liberado cuanto antes de un sistema condenado por el mundo entero. Eso no significaba que no se tratara de adoptar todas las medidas posibles en el plano internacional para asegurar la estabilidad política y de integridad territorial de las nuevas naciones independientes.

431. Como ya había señalado el representante del Uruguay en el Subcomité, Bechuania y Basutolandia no habían pedido a la Potencia Administradora protección militar después de la obtención de la independencia y el Reino Unido retiraría de esos Territorios sus fuerzas a partir de ese momento. Ahora bien, ambos Territorios sólo podrían gozar de garantías si los Gobiernos elegidos libremente por ellos mismos estaban en condiciones de aplicarlas. Tal como el Reino Unido había prometido, los nuevos países continuarían beneficiándose de su ayuda económica.

432. El representante del Uruguay señaló también que, en el terreno económico, las relaciones entre los tres Territorios y Sudáfrica proporcionaban a los primeros ventajas considerables, según se desprendía de las cifras contenidas en la información que el Subcomité había tenido a la vista (véase apéndice III, párr. 5). En los tres Territorios, los partidos reconocían que era necesario mantener esas relaciones a pesar de las diferencias políticas existentes.

433. Bechuania y Basutolandia iban a pedir su admisión en las Naciones Unidas. La calidad de Miembros de esta Organización les daría, una vez independientes, garantías jurídicas y políticas. Cuando los nuevos Gobiernos independientes pidieran garantías concretas, la cooperación económica con Sudáfrica podía tornarse aún más difícil.

434. Había también la posibilidad de que los Gobiernos de esos dos países no desearan formular recomendaciones a las Naciones Unidas y dejaran a otros la tarea de adoptar las medidas que les interesaran en el seno de la Organización una vez que se hubieran convertido en Estados soberanos. Para encontrar fórmulas claras y simples, no había que aceptar ningún plan que teóricamente pudiera adoptarse con la conciencia tranquila pero que al mismo tiempo crease en la práctica dificultades mayores que las que habían de superarse, porque era la independencia de los pueblos de los tres

Territorios lo que debía preocupar ante todo a los miembros del Comité.

435. En consecuencia, la delegación uruguaya deseaba dar su apoyo a todas las conclusiones del informe relativas a las garantías y medidas que podrían adoptar las Naciones Unidas en sus diversas esferas de actividad para proteger a los Territorios.

436. El representante del Uruguay opinaba que era imposible adoptar otra solución por falta de tiempo y porque había que aceptar el hecho consumado, es decir las fechas fijadas para la independencia.

437. El libre ejercicio del gobierno propio daría los resultados que se descontaban y la protección ofrecida por las Naciones Unidas a los nuevos Estados soberanos resultaría eficaz si la Organización internacional gozaba del apoyo de los Estados Miembros y si éstos colocaban el respeto al derecho por encima de las consideraciones políticas.

438. Habían entrado en juego dos factores: el propósito inquebrantable del Subcomité de no retrasar la independencia y la situación geográfica de los Territorios que, por estar enclavados en el corazón de Sudáfrica, no podrían conservar su autonomía porque no lograrían bastarse a sí mismos en el plano económico.

439. Por ejemplo, uno de los principales problemas de Basutolandia era el de la mano de obra que proporcionaba a Sudáfrica. Sin subvención de la Potencia Administradora, más del 50% del ingreso de ese Territorio dependería del suministro de esa mano de obra. No cabía sino concluir que esos problemas económicos no eran fáciles de resolver y que no bastaban las decisiones adoptadas en las Naciones Unidas para su solución. Harían falta esfuerzos energéticos porque, tal como había dicho el representante del Reino Unido, se planteaban problemas étnicos que habría que considerar y resolver.

440. Los miembros del Subcomité habían hecho concesiones en aras de la unanimidad a fin de que esos Territorios obtuvieran la independencia y que al mismo tiempo contaran con la seguridad de que no serían aplastados por el enemigo que los rodeaba.

441. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas indicó que su país estimaba que las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales eran totalmente aplicables a los tres Territorios en estudio.

442. La delegación soviética compartía el parecer de los miembros del Subcomité que habían hecho hincapié en la responsabilidad del Reino Unido por una situación que entrañaba una amenaza constante para la integridad territorial y la independencia política de los tres Territorios. También estaba de acuerdo en que se debía instar al Reino Unido a que cumplierse los deberes que le incumbían con arreglo a la Carta y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de asegurar que la independencia de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se basase en los deseos libremente expresados de todos los habitantes de los Territorios. Convenía, asimismo, en que el Reino Unido debía adoptar medidas para asegurar el establecimiento de gobiernos plenamente representativos de los deseos de la población, que se encontrarían así en mejor posición para resistir las presiones de Sudáfrica.

443. La delegación soviética apoyaba totalmente la recomendación del Subcomité de que el Comité Espe-

cial recomendase a la Asamblea General que hiciese una solemne advertencia al Gobierno de la República de Sudáfrica en el sentido de que toda tentativa de vulnerar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios, una vez lograda su independencia, sería considerada por las Naciones Unidas como un acto de agresión. También apoyaba la recomendación de que la Asamblea General señalase a la atención del Consejo de Seguridad la amenaza que la política anexionista de Sudáfrica representaría para Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, después de alcanzada la independencia. Resultaba particularmente importante la recomendación de que la Asamblea General hiciera un llamamiento a todos los Estados para que se abstuvieran de cualquier medida que pudiera alentar al Gobierno de la República de Sudáfrica a vulnerar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios o a inmiscuirse en sus asuntos internos. La delegación soviética acogía igualmente con beneplácito la recomendación relativa a la celebración de consultas entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana sobre la cuestión de garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía de los tres Territorios, una vez que éstos se hubieran independizado.

444. En vista de todo ello, la delegación soviética apoyaba las conclusiones y recomendaciones del Subcomité y votaría en favor de su aprobación.

445. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que su delegación, que había estudiado cuidadosamente el informe del Subcomité, lamentaba no poder apoyar muchas de las conclusiones y recomendaciones que figuraban en él. Los Estados Unidos aceptaban el objetivo político básico de que se diera a la población de los Territorios el derecho de expresar sus deseos libremente y de gobernarse sin injerencias externas; también tenían presentes las relaciones que existían entre los Territorios y la República de Sudáfrica como resultado de su posición geográfica y el efecto que esas relaciones podrían ejercer en su situación política. Sin embargo, la delegación norteamericana estimaba que el informe dejaba de tener en cuenta algunos importantes elementos de la situación real. Como sabía el Comité, dos de los Territorios iban a hacerse independientes dentro de unas semanas, y tendrían que buscar una fórmula para preservar su independencia frente a graves problemas económicos y políticos. Ya había sido informado el Comité que el Reino Unido proporcionaría considerable asistencia a tales Territorios cuando fuesen independientes. No obstante, la delegación de los Estados Unidos estimaba que una vez que los Territorios se hubiesen transformado en Estados plenamente independientes, con Gobiernos elegidos a base del sufragio universal de los adultos y la igualdad racial, tales Gobiernos tendrían derecho a obtener cuanta asistencia adicional requiriesen de cualquier fuente que eligieran. En consecuencia, la delegación norteamericana se veía obligada a reservar su posición acerca del informe del Subcomité.

446. El representante de Dinamarca señaló que, a juicio de su delegación, algunas de las recomendaciones que contenía el párrafo 14 del informe, y especialmente las que figuraban en el inciso a), no tenían suficientemente en cuenta el hecho de que Basutolandia y Bechuania iban a ser Estados independientes dentro de algunas semanas. Por ello la delegación de Dinamarca se veía obligada a reservar su posición sobre el informe;

no se oponía, sin embargo, a que se aprobara por consenso.

447. El representante de Australia manifestó que Basutolandia y Bechuania, dada su posición geográfica respecto de Sudáfrica, tendrían que establecer alguna clase de *modus vivendi* con este último país cuando en un futuro cercano alcanzaran la independencia. El representante del Reino Unido, en la sesión anterior, había expuesto la situación con una perspectiva muy clara. Particularmente importante era la información que dicho representante había vuelto a proporcionar sobre la mayoría legislativa de que gozaba el actual Gobierno de Basutolandia, a pesar de la no inusitada circunstancia de haber recibido en las elecciones menos votos que la oposición, y sobre la situación en Bechuania, donde el partido gobernante había obtenido el 80% de los asientos. Cabía observar que las elecciones que produjeron tales resultados se habían llevado a cabo de conformidad con el principio "una persona, un voto". En consecuencia, la delegación de Australia no podía aceptar lo que implicaban los apartados i) y ii) del inciso a) del párrafo 14 del informe.

448. Con respecto al apartado iii) del inciso a), la delegación de Australia no veía qué era lo que el Reino Unido podría hacer en relación con los Territorios de que se trataba, más allá de lo que ya había hecho y lo que proyectaba hacer.

449. Respecto del inciso c), el representante australiano estaba de acuerdo con el representante del Reino Unido en que sería inusitado — y tal vez impropio — que se adoptasen las medidas propuestas sin consulta alguna con los Gobiernos de los Territorios.

450. Para concluir, el representante de Australia observó que el Comité, pese a la preocupación que se experimentaba en cuanto a los Territorios, estaba de acuerdo en que no se retrasaran las fechas fijadas para la independencia. Por consiguiente, la delegación australiana creía que se debía dar a los Gobiernos de los Territorios toda la ayuda adecuada para que desarrollen su existencia independiente por los caminos que ellos mismos escogieran mediante procesos democráticos y a base de la igualdad racial.

451. Por todo ello, la delegación de Australia no podía apoyar el informe tal como se encontraba redactado.

Medidas adoptadas por el Comité Especial respecto del informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

452. El Comité Especial, en su 467a. sesión, celebrada el 15 de septiembre de 1966, aprobó por consenso el informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, en la inteligencia de que las reservas expuestas por los miembros se harían constar en las actas de las sesiones del Comité Especial.

453. En cartas de fecha 20 de septiembre de 1966, el Presidente del Comité Especial, habida cuenta de los incisos a) y c) del párrafo 14 de la sección II del informe, del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia¹⁴, transmitió dicho informe al Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Naciones Unidas y al Secre-

tario General administrativo de la Organización de la Unidad Africana.

APENDICE I

Declaración conjunta formulada el 14 de junio de 1966 por los jefes de los partidos de oposición de Basutolandia

La declaración conjunta incluye los siguientes pasajes principales:

"Nuestros dos partidos, que juntos representan a la gran mayoría de los basutos, están dispuestos a presentarse en coalición a nuevas elecciones a fin de asegurar la elección de un gobierno que cuente con la confianza de la mayoría.

"Al otorgar la independencia a un gobierno impopular de minoría, y en condiciones a las que se opone tenazmente la gran mayoría del pueblo, el Gobierno británico creará en realidad una fuente de problemas en el corazón mismo de Sudáfrica, país que durante muchos años ha estado esperando precisamente esta oportunidad.

"Entendemos muy bien que el Jefe Leabua Jonathan no pueda hacer frente a ninguna nueva elección porque su partido sufriría inevitablemente una derrota. Pero la actitud de los funcionarios británicos es, al menos, extraña. Al parecer el Gobierno británico, con insólita rapidez, está decidido a entregar el país a un gobierno de minoría."

Los jefes advertían también sobre "las tristes consecuencias, como en Zanzíbar", que tendría el que el Reino Unido concediese la independencia bajo un gobierno "no representativo de la mayoría del electorado", y hacían resaltar el contraste de esta actitud con la introducción de la representación proporcional hecha por el Reino Unido en la Guayana Británica.

APENDICE II

Declaración conjunta formulada el 15 de junio de 1966 por los jefes de los partidos de oposición de Basutolandia

En esta declaración conjunta, los jefes expresaron las razones por las que sus partidos se retiraron de la conferencia constituyente. Dijeron:

"No estábamos dispuestos a participar en una conferencia cuyas conclusiones habían sido convenidas de antemano entre el partido minoritario que gobierna a Basutolandia y los funcionarios coloniales respaldados por el Secretario para las Colonias.

"El papel que se nos ha asignado en esta conferencia es el de fantoches en una pantomima cuidadosamente ensayada. Por lo tanto, nos vemos obligados a protestar de la única manera que nos queda, desasociándonos por completo de esta farsa.

"Hoy, en nombre de la mayoría del pueblo suto, anunciamos que no estamos dispuestos a aceptar como obligatoria ninguna constitución para la independencia de Basutolandia que se firme entre el Gobierno británico y el gobierno minoritario del Jefe Leabua Jonathan.

"No puede haber ninguna certeza de que los basutos se sometan tranquilamente a un gobierno bajo una constitución que no sólo debilita nuestras instituciones tradicionales sino que afirma el poder central en manos de un gobierno minoritario.

"Gran Bretaña tiene todavía una oportunidad, su última oportunidad, para evitar la internacionalización de esta cuestión, insistiendo en que la conferencia constituyente se suspenda, a fin de permitir que se la continúe en condiciones que abran camino al proceso esencial de unificación necesario para hacer que una nación independiente y fuerte surja y sobreviva en el foco crítico del África meridional."

¹⁴ Las recomendaciones contenidas en este informe constan en el apéndice III, párr. 14.

APENDICE III

[A/AC.109/L.326]

Informe del Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia

Relator: Sr. Matey KARASIMEONOV (Bulgaria)

INTRODUCCIÓN

1. El Subcomité sobre Basutolandia, Bechuania y Swazilandia fue creado por el Comité Especial en virtud de la resolución adoptada en su 439a. sesión, del 9 de junio de 1966 (A/AC.109/178). En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la referida resolución, el Comité Especial decidió "crear un subcomité encargado de realizar estudios y de proponer las medidas necesarias para garantizar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios, como lo pidió la Asamblea General en el párrafo 5 de su resolución 2063 (XX)".

2. El Presidente del Comité Especial designó miembros del Subcomité a Afganistán, Bulgaria, Irán, Italia, Malí, Madagascar y Uruguay.

3. El Subcomité celebró seis sesiones entre el 27 de julio y el 9 de septiembre de 1966.

4. En su primera sesión, celebrada el 27 de julio de 1966, el Subcomité eligió como Presidente al Sr. Pedro P. Berro, del Uruguay, y como Relator al Sr. Matey Karasimeonov (Bulgaria).

I. DEBATES EN EL SUBCOMITÉ

5. El Subcomité, al examinar la cuestión que le había remitido el Comité Especial, tuvo en cuenta los diversos factores políticos y económicos que afectaban a la integridad territorial y soberanía de los Territorios; la información pertinente sobre estos factores figura en los informes que el Comité Especial ha dirigido a la Asamblea General en sus decimoséptimo, decimonoveno, vigésimo y vigésimo períodos de sesiones^a así como en el informe presentado por el Secretario General a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones^b.

6. De las observaciones preliminares efectuadas sobre esta cuestión se deduce que los miembros del Subcomité coincidían en reconocer la urgencia del problema y la grave necesidad de adoptar lo antes posible medidas a fin de asegurar la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios.

7. Todos los miembros del Subcomité compartieron la opinión de que, al hallarse Basutolandia, Bechuania y Swazilandia rodeadas completamente o en gran parte por la República de Sudáfrica, existía el peligro de que, en un próximo futuro, Sudáfrica intentase anexarse esos Territorios como desde hace bastante tiempo ha venido pretendiendo. Además, anteriores incursiones realizadas por las fuerzas de policía de Sudáfrica en los Territorios sin el previo consentimiento de las autoridades locales han servido para poner de relieve la permanente amenaza a la integridad territorial de los tres Territorios citados. Pero tampoco se limitaba a la anexión directa el peligro que corren esos tres Territorios. Existía un peligro muy serio que radica en su vulnerabilidad a las presiones económicas desde Sudáfrica, país este que, por ejemplo, podría en cualquier momento imponer unilateralmente restricciones al tránsito de personas y bienes entre Sudáfrica y los Territorios.

^a Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del programa, documento A/5238, cap. V; *ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1, cap. IX; *ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I), documento A/5800/Rev.1, cap. VIII; e *ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa, documento A/6000/Rev.1, cap. VII.

^b *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5958.

8. Varios miembros del Subcomité señalaron que el Reino Unido, en su calidad de Potencia Administradora, era responsable del progreso económico de los Territorios y de procurarles la consecución de una verdadera independencia con gobiernos que fueran auténticamente representativos de la voluntad del pueblo. A juicio de varios miembros, los actuales Gobiernos de los Territorios no gozaban de la confianza de la mayoría de la población y, por lo tanto, constituían otro factor que acrecentaba la vulnerabilidad de los Territorios ante las presiones procedentes de Sudáfrica. Una delegación estimó que los problemas de carácter constitucional quedaban fuera de las atribuciones del Subcomité, según se fijan en el párrafo 4 de la resolución del Comité Especial, de 9 de junio de 1966 (A/AC.109/178).

9. Por consiguiente, la mayoría de los miembros del Subcomité consideró que era necesario, en primer lugar, reafirmar la responsabilidad del Reino Unido respecto de una situación en la que se da una amenaza constante a la integridad territorial e independencia política de los tres Territorios. En segundo término, y como asunto de urgencia, las Naciones Unidas debían instar de nuevo al Reino Unido a que cumpliera los deberes que le incumben con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y a la resolución 1514 (XV) de asegurar que la independencia de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia se base en los deseos libremente expresados de todos los habitantes de los Territorios. Varios miembros sugirieron, por lo tanto, que el Reino Unido adoptase las medidas pertinentes para asegurar el establecimiento de gobiernos plenamente representativos de los deseos de la población, que así se encontrarían en una mejor posición para resistir las presiones de Sudáfrica.

10. A lo largo de los debates, el Subcomité llegó al convencimiento de que el problema sometido a su consideración no tenía precedentes históricos y que, si bien había ejemplos de diversas cláusulas de tratados y declaraciones garantizando la integridad territorial y la independencia política de los Estados, en ninguna de ellas se contenían todos los elementos necesarios para resolver los problemas de los tres Territorios. Como quiera que dos de los citados Territorios obtendrán la independencia dentro de pocas semanas — Basutolandia el 4 de octubre de 1966 y Bechuania el 30 de septiembre de 1966 — el Subcomité estima que las Naciones Unidas deberían adoptar urgentemente medidas para garantizar la integridad territorial y la independencia política de los Territorios. Si la Asamblea General adoptase decisiones en este sentido, ello sería una consecuencia lógica de las advertencias por ella formuladas en la resolución 1817 (XVII) de 18 de diciembre de 1962 y nuevamente en la resolución 1954 (XVIII) de 13 de diciembre de 1963 en el sentido de que "toda tentativa de anexar a Basutolandia, Bechuania y Swazilandia o de infringir de cualquier modo su integridad territorial será considerada por las Naciones Unidas como un acto de agresión que viola la Carta de la Organización".

11. El Subcomité también examinó los problemas especiales de los tres Territorios, inclusive el derecho de tránsito de personas y de bienes, factores que afectarán a la integridad territorial y a la soberanía de los Territorios cuando consigan la independencia. Estimó que, para que los Territorios puedan gozar de una independencia real, tenían que adoptarse medidas específicas para garantizar que, una vez convertidos en Estados soberanos, no se produzca una perturbación del régimen de tránsito y de comercio. En opinión del Subcomité, estas cuestiones deben ser asuntos de los que había de ocuparse la Asamblea General.

12. A este respecto, algunos miembros del Subcomité recordaron que en 1964 la Organización de la Unidad Africana (OUA) también adoptó resoluciones sobre la cuestión de la integridad territorial de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia (véase el anexo) en las que la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno pidió a los Estados miembros de la OUA que, en consulta con las autoridades de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, estudiaran las medidas pertinentes para procurar que las Naciones Unidas garanticen la integridad territorial, la independencia y la soberanía de los mencio-

nados Territorios. Por otra parte, la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA autorizó asimismo al Grupo Africano en las Naciones Unidas a tomar las medidas del caso a fin de presentar la cuestión de una garantía a los órganos competentes de las Naciones Unidas. Dado el interés de la OUA, en el Subcomité se sugirió que el Comité Especial celebre consultas acerca del problema de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia con dicha Organización.

13. En cuanto a las medidas que debería adoptar la Asamblea General, el Subcomité estimó que, como primer paso, debería señalar a la atención del Consejo de Seguridad la amenaza que para la integridad territorial y la soberanía de los Territorios plantea la política del Gobierno de la República de Sudáfrica y también hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros a que se abstengan de cualquier acción que pueda estimular al Gobierno de Sudáfrica a proseguir en su política.

II. RECOMENDACIONES

14. El Subcomité recomienda lo siguiente:

a) El Subcomité presenta las siguientes recomendaciones al Comité Especial:

- i) Que reafirme la responsabilidad de la Potencia Administradora, la cual debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que los tres Territorios obtengan la independencia en la forma prescrita en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;
 - ii) Que inste, en consecuencia, a la Potencia Administradora a que asegure que las poblaciones de los tres Territorios puedan expresar libremente sus deseos y elegir sus representantes y su gobierno en forma libre y democrática;
 - iii) Que pida, además, a la Potencia Administradora que adopte todas las medidas pertinentes, antes que los Territorios accedan a la independencia, para que los tres Territorios puedan gozar de una completa independencia y para proteger su integridad territorial y su soberanía ante los manifestos designios del régimen racista de la República de Sudáfrica en el sentido de continuar injiriéndose en sus asuntos políticos, económicos y sociales.
- b) El Subcomité recomienda al Comité Especial que haga las siguientes recomendaciones a la Asamblea General:

- i) Que reafirme sus resoluciones 1817 (XVII) y 1954 (XVIII) y advierta de nuevo solemnemente al Gobierno de la República de Sudáfrica que toda tentativa de infringir la integridad territorial y la soberanía de los tres Territorios a raíz de la independencia será considerada por las Naciones Unidas como un acto de agresión; y que cualquier injerencia en sus asuntos internos, inclusive sus asuntos económicos, y cualquier restricción de la circulación en el tránsito de personas y mercancías serán consideradas como una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, con todas las consecuencias inherentes;
 - ii) Que señale a la atención del Consejo de Seguridad en este sentido la amenaza que la política practicada por el régimen racista de la República de Sudáfrica representa para la independencia, integridad territorial y soberanía de los tres Estados después de alcanzada su independencia;
 - iii) Que además haga un llamamiento a todos los Estados a que se abstengan de cualquier medida que pudiera alentar al Gobierno de la República de Sudáfrica a infringir la integridad territorial y la soberanía de los tres Estados, o a inmiscuirse en sus asuntos internos.
- c) El Subcomité recomienda que el Comité Especial, por conducto de sus funcionarios, celebre consultas con la Organización de la Unidad Africana sobre los problemas de los

tres Territorios, por cuanto dicha Organización aprobó en 1964 y 1965 resoluciones en las que se impartían instrucciones a los Estados africanos y al grupo africano en las Naciones Unidas al objeto de que presentasen ante los órganos competentes de las Naciones Unidas la cuestión de las garantías para asegurar la integridad territorial, la independencia y la soberanía de los tres Estados.

d) Que habida cuenta de que Bechuania obtendrá la independencia el 30 de septiembre y Basutolandia el 4 de octubre el Comité Especial recomienda a la Asamblea General que considere como asunto de prioridad el tema de su programa en que figuran los tres Territorios, encomendando a la Cuarta Comisión el estudio de la cuestión al inaugurarse el vigésimo primer período de sesiones.

III. APROBACIÓN DEL INFORME

15. Este informe fue aprobado por unanimidad por el Subcomité en su sexta reunión del 9 de septiembre de 1966.

Anexo

Resoluciones de la Organización de la Unidad Africana (OUA)

A. Resolución AHG/Res.12 (I). *La integridad territorial de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia*

La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, reunida en su primer período ordinario de sesiones, celebrado en El Cairo, República Árabe Unida, del 17 al 21 de julio de 1964,

Habiendo examinado la posible situación en que se encontrarán Basutolandia, Bechuania y Swazilandia al independizarse,

Tomando nota de que el Gobierno del Reino Unido ha acordado conceder la independencia a estos territorios en un futuro inmediato,

Tomando nota asimismo de que en la resolución 1954 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se advierte solemnemente al Gobierno de la República de Sudáfrica que "toda tentativa de anexionar Basutolandia, Bechuania y Swazilandia o de infringir de cualquier modo su integridad territorial será considerada por las Naciones Unidas como un acto de agresión que viola la Carta de la Organización",

1. *Pide* a los Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana que, en consulta con las autoridades de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, adopten las medidas necesarias con objeto de obtener de las Naciones Unidas que garanticen la integridad territorial, independencia y soberanía de estos territorios;

2. *Autoriza* en particular al grupo africano de las Naciones Unidas a adoptar, en consulta con el Comité de Liberación y los movimientos nacionalistas de estos territorios, las medidas oportunas para plantear a su debido tiempo ante el Consejo de Seguridad la cuestión de dicha garantía.

B. Resolución AHG/Res.36. *Territorios de la Alta Comisión, 25 de octubre de 1965*

La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, reunida en su segundo período ordinario de sesiones, celebrado en Accra, Ghana, del 21 al 25 de octubre de 1965,

Habiendo examinado el informe del Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana,

Inquieta ante el hecho de que los partidos que han declarado abiertamente que colaborarían estrechamente con el régimen de Pretoria han asumido el control del aparato gubernamental en estos territorios,

Deseosa de impedir la absorción de estos territorios por el Gobierno de Pretoria,

1. *Reafirma* las distintas decisiones adoptadas por la Organización de la Unidad Africana;

2. *Toma nota con satisfacción* de los incesantes esfuerzos hechos por los Estados africanos Miembros de las Naciones Unidas para garantizar la aplicación de la resolución 1514 (XV) relativa a la concesión de la independencia a los países coloniales y para alentarlos a proseguir sus esfuerzos hasta la consecución de su plena independencia;

3. *Decide* seguir apoyando a los movimientos que hasta la fecha han venido recibiendo el apoyo de la Organización de la Unidad Africana;

4. *Reitera su petición* a los Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana para que adopten las medidas necesarias con objeto de lograr que las Naciones Unidas garanticen la integridad territorial, independencia y soberanía de estos territorios;

5. *Pide* una vez más al grupo africano de las Naciones Unidas que adopte las medidas oportunas para plantear la cuestión de tal garantía ante los órganos competentes de las Naciones Unidas.

CAPÍTULO VIII*

ISLAS VITI

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. Después de examinar la situación en las Islas Viti en sus sesiones de octubre y noviembre de 1964, el Comité Especial aprobó en su 302a. sesión, celebrada el 5 de noviembre de 1964, una resolución en que pedía a la Potencia Administradora que aplicara sin mayor demora las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General, y en particular el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1951 (XVIII), que invitaba a la Potencia Administradora a que preparara, en colaboración con representantes del pueblo de las Islas Viti, una nueva Constitución que previera la realización de elecciones libres a base del principio de "un voto por persona" y la creación de instituciones representativas; adoptara inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes al pueblo de las Islas Viti, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, sin condiciones ni reservas de ninguna clase; y tratara, en colaboración con el pueblo de las Islas Viti, de lograr la integración política, económica y social de las distintas comunidades (A/5800/Rev.1¹, cap. XIII, párr. 119).

2. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General, después de examinar las partes de los informes del Comité Especial relativas a las Islas Viti, aprobó la resolución 2068 (XX) de 16 de diciembre de 1965, cuyo texto dice como sigue:

"La Asamblea General,

"...

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, 1810 (XVII) de 17 de diciembre de 1962, y 1951 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, así como la resolución aprobada por el Comité Especial el 5 de noviembre de 1964,

"Tomando nota con pesar de que la Potencia Administradora no ha adoptado hasta ahora medidas eficaces para aplicar las resoluciones de la Asamblea General,

"Teniendo en cuenta que todo nuevo retraso en la aplicación de esas resoluciones crearía nuevas dificultades a la población del Territorio,

"Considerando que los cambios de índole constitucional previstos por la Potencia Administradora suscitarían tendencias separatistas y pondrían obstáculos

a la integración del conjunto de la población en las esferas política, económica y social,

"1. Aprueba los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes al Territorio de las Islas Viti y hace suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuran;

"2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Islas Viti a la libertad y la independencia, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"3. Invita al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como Potencia Administradora, a que aplique inmediatamente las resoluciones de la Asamblea General;

"4. Pide a la Potencia administradora que tome urgentemente medidas para derogar todas las leyes de carácter discriminatorio e instituir un sistema incondicional de representación democrática, fundado en el principio de un voto por persona;

"5. Pide además a la Potencia administradora que informe al Comité Especial y a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente resolución;

"6. Invita al Comité Especial a que continúe examinando la cuestión e informe al respecto a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones;

"7. Decide incluir la cuestión de las Islas Viti en el programa provisional de su vigésimo primer período de sesiones."

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO²

Introducción

3. La información sobre las Islas Viti figura en los informes a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo (A/5800/Rev.1, cap. XIII; A/6000/Rev.1³, cap. XII). A continuación se

² La información presentada en esta sección se basa en los informes publicados. La información transmitida el 9 de junio de 1965 al Secretario General por el Reino Unido, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, se utilizó en la preparación del capítulo sobre las Islas Viti en el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. XII).

³ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.6.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

consigna la información complementaria sobre los acontecimientos recientes.

4. A fines de 1964 se calculaba que la población total era de 456.390 habitantes, compuesta de naturales de Viti (41,5%), indios (50%) y de otra procedencia (8,5%).

Evolución política y constitucional

Constitución actual de las Islas Viti

5. Por Real Decreto de principios de 1963 se instituyó una nueva Constitución para las Islas Viti que ampliaba el Consejo Legislativo así como el derecho de voto. El actual Consejo Legislativo está integrado por un Presidente, hasta 19 miembros oficiales (cuyo número se ha reducido, en la práctica, a 10) y 18 miembros no oficiales (seis naturales de Viti, seis indios y seis europeos), la mayoría de los cuales se eligen directamente.

6. Un cambio, que no entrañaba ninguna enmienda de la Constitución, se introdujo en julio de 1964 cuando entró en vigor un sistema de gobierno en cuya virtud los miembros del Consejo Legislativo participan en el Poder Ejecutivo. En esa oportunidad se reconstituyó el Consejo Ejecutivo, que ahora se compone de cuatro miembros oficiales y seis no oficiales (dos naturales de Viti, dos indios y dos europeos), tres de los cuales están directamente asociados con la supervisión de grupos de dependencias oficiales y la formulación y presentación de la política del gobierno respecto de determinadas cuestiones.

Conferencia Constituyente de las Islas Viti

7. Según se informó anteriormente (A/6000/Rev.1, cap. XII, párr. 4), debía celebrarse en Londres a principios de 1965 una Conferencia Constituyente. En abril de 1965 el Subsecretario Parlamentario de Estado para las Colonias visitó las Islas Viti y celebró conversaciones con los representantes de las diversas comunidades a fin de conocer sus opiniones, especialmente las de minorías que no estarían directamente representadas en la Conferencia Constituyente, en que sólo participarían los 18 miembros no oficiales del Consejo Legislativo.

8. En julio de 1965 el Secretario de Estado para las Colonias reseñó los objetivos de la Conferencia. Sugirió que debería considerar, entre otras cosas, la evolución del sistema de participación en el Poder Ejecutivo; el fortalecimiento y la ampliación del sector electo en el Consejo Legislativo; y las cuestiones relativas al derecho de voto. Sin duda alguna, descarta examinar la adopción de disposiciones concernientes a los derechos humanos, a la administración pública y al poder judicial.

9. Antes que la Conferencia se inaugurara se convino en que la independencia no era una de las cuestiones que se discutirían en la Conferencia de Londres. Hubo acuerdo asimismo en que las comunidades de minorías que carecen actualmente de derecho de voto pasarían a integrar los registros electorales; las principales comunidades de esta índole son los rotumanos, los chinos y otros isleños del Pacífico.

10. La Conferencia Constituyente de las Islas Viti de 1965 se celebró en Londres del 26 de julio al 9 de agosto, y en una fecha ulterior se publicó un informe que consigna sus recomendaciones.

11. La Conferencia recomendó, entre otras cosas, que en las Islas Viti se eligiera a la mayoría de los miembros del Consejo Legislativo; que se abandonara la práctica de nombrar miembros no oficiales y se redujera el número de miembros oficiales nombrados; que los grupos de minorías en la población (principalmente chinos e inmigrantes de otras islas del Pacífico) gozaran del derecho de voto, lográndose así el sufragio universal de los adultos; que se introdujera un sistema ministerial.

12. El informe hacía observar que durante las deliberaciones hubo algunos asuntos sobre los cuales los pareceres de la delegación de las Islas Viti no fueron unánimes. Estos fueron principalmente: el método propuesto de elección; la representación de las diversas comunidades en el Consejo Legislativo; y los poderes del Consejo Ejecutivo.

13. El informe expuso que el grupo indio deseaba reemplazar el sistema vigente de elecciones en registros comunales por un registro directo común sin exigencias comunales para los electores ni reservas comunales de cargos para los candidatos. Los grupos de naturales de Viti y europeos no podían aceptar la introducción de un sistema de elecciones sobre la base de un registro común en la etapa actual o en una fecha cercana, por lo que no se llegó a un acuerdo sobre cuándo podría implantarse ese sistema.

14. El Gobierno del Reino Unido estimaba que la elección a base de un registro común directo no sería factible en las Islas Viti hasta que se hubiera logrado un mayor grado de integración de sus comunidades. A su juicio era importante, sin embargo, que se introdujera un sistema en virtud del cual algunos miembros fuesen elegidos por votantes de todas las comunidades y responderían ante éstos. Al efecto, formuló propuestas para un sistema de votación mixto por el cual algunos miembros serían elegidos por votantes de todas las comunidades y responderían ante ellos. Las aceptaron en definitiva los grupos de naturales de Viti y europeos, que pusieron de relieve que esas propuestas se someterían a la consideración de las comunidades en las Islas Viti afectadas por ellas, merced a un debate en el Consejo Legislativo. Dichas propuestas no las aceptó el grupo indio, salvo, parcialmente, un delegado indio, que prefería la adopción de un sistema de elecciones basado en un registro común, pero estuvo dispuesto a aprobar las propuestas en cuanto se referían al método de elección. Cuando se evidenció que su propuesta de elecciones universales en un registro común no era aceptable, el grupo indio ofreció una nueva fórmula que aumentaría el número de miembros elegidos con arreglo al sistema de votación mixto. Esto no fue aceptado por los grupos de naturales de Viti y europeos. El grupo indio indicó entonces que en estas circunstancias desearía mantener su posición relativa a elecciones universales a base de un registro común.

15. El grupo indio rechazó por unanimidad la propuesta de que debería haber dos miembros naturales de Viti más que los miembros indios en el Consejo Legislativo. Consideró que, como los indios constituyen la mayoría de la población, tenían derecho cuando menos a una paridad de representación con la comunidad de Viti.

16. En los debates sobre las disposiciones de la Constitución relacionadas con los poderes ejecutivos, el grupo indio, con un disidente, consideró que había llegado el

momento de introducir sin dilación la plenitud del gobierno propio interno. El resto de la delegación de las Islas Viti consideró necesario aún que el Gobernador retuviera un grado apreciable de facultades discrecionales.

Consejo Legislativo

17. La Conferencia recomendó que el Consejo Legislativo comprendiera 36 miembros elegidos y a lo sumo cuatro miembros oficiales nombrados por el Gobernador. Los miembros no oficiales serían los siguientes: catorce naturales de Viti: nueve elegidos conforme al registro comunal de naturales de Viti, dos elegidos por el Consejo de Jefes de Viti, tres elegidos con arreglo a un nuevo sistema de votación mixto; doce indios: nueve elegidos de conformidad con el registro comunal indio, tres elegidos conforme al sistema de votación mixto; diez europeos: siete elegidos con arreglo al registro comunal, tres elegidos conforme al sistema de votación mixto.

18. El registro comunal para naturales de Viti incluiría asimismo a los rotumanos y a otros isleños del Pacífico. Los chinos y cualquier otra comunidad de minoría anteriormente sin derecho de voto figurarían en el registro comunal con los europeos. Para la elección de los nueve miembros con arreglo al sistema de votación mixto, las Islas Viti se dividirían en tres distritos electorales, cada uno de los cuales elegiría un natural de Viti (o rotumano u otro isleño del Pacífico), un indio y un europeo (o chino o miembro de otro grupo de minoría), resultando cada miembro elegido por personas de todas las comunidades. La Conferencia abolió algunos requisitos e inhabilidades concernientes a los candidatos y los electores. Entre ellos figuraron las exigencias relativas a los bienes o ingresos de los candidatos y la prueba de que los votantes sabían leer y escribir. El Consejo Legislativo elegiría un Presidente sin derecho de voto, bien dentro del Consejo, o bien entre personas calificadas para integrar el Consejo. El Consejo quedaría asimismo facultado para nombrar entre sus miembros a un Vicepresidente. El período máximo de funciones del Consejo sería de cinco años.

19. A reserva de las restricciones impuestas por la *Colonial Laws Validity Act*, 1865, y por las disposiciones de la propia Constitución relativas a las garantías individuales, la Constitución daría al Consejo Legislativo plenas facultades para dictar leyes sobre cualquier materia. Habría una disposición que impidiera presentar proyectos de ley sin el consentimiento del Gobernador cuando su efecto fuese imponer tributos o aumentar los gastos o alterar las condiciones de servicio de los funcionarios públicos. El Gobernador tendría poder para negar su asentimiento, poderes reservados en materia de legislación, y facultad para asegurar que los proyectos de ley fueran sancionados por certificación. Algunas cuestiones mencionadas con referencia a leyes particulares se tratarían conforme a un procedimiento especial en el Consejo Legislativo. En virtud de este procedimiento, los proyectos de ley que afectarían a las leyes pertinentes requerirían el apoyo de más de los dos tercios de todos los miembros elegidos del Consejo Legislativo. Una exigencia análoga se aplicaría a toda resolución cuyo efecto fuese recomendar alguna reforma de la Constitución.

Consejo Ejecutivo

20. La Conferencia recomendó que la autoridad ejecutiva continuara oficialmente radicada en el Gober-

nador, quien seguiría nombrando a los miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo. Estos se escogerían entre los miembros elegidos del Consejo Legislativo, y el Gobernador aseguraría la adecuada representación de las distintas comunidades de las Islas Viti. La Constitución dispondría que oportunamente el Gobernador nombrara miembros del Consejo Ejecutivo para que actuasen como ministros con poderes ejecutivos, y que en ese momento el Consejo Ejecutivo pasara a ser un Consejo de Ministros.

21. El Gobernador debería consultar al Consejo Ejecutivo y, en general, aceptar su dictamen, salvo cuando estimare necesario obrar contra éste por exigirle así los intereses del orden público, la fe pública o el buen gobierno. Ciertas cuestiones, incluso la defensa, los asuntos exteriores, la seguridad interna y la administración pública, quedarían reservadas al Gobernador.

22. Se formularon asimismo recomendaciones para el establecimiento de un Tribunal Supremo y un Tribunal de Apelaciones; para la institución de una comisión asesora de servicios judiciales y jurídicos, una comisión de administración pública y una comisión de policía; y para que se incluyera en la Constitución una declaración de derechos.

Acción legislativa respecto de las propuestas constitucionales

23. El 16 de diciembre de 1965 el Consejo Legislativo de las Islas Viti aprobó las propuestas por 12 votos contra 5 y 7 abstenciones. Los miembros oficiales no participaron en el debate y se abstuvieron en la votación. Se espera que la nueva Constitución entre en vigor en 1966.

Elecciones

24. Una elección general para el nuevo Consejo Legislativo (véase párr. 17 *supra*) ha de celebrarse en las Islas Viti a mediados de 1966; se efectuará a base del sufragio universal de los adultos. Se estima que alrededor de 182.500 personas podrán inscribirse como electores. En las elecciones de 1963, cuando las mujeres votaron por primera vez, se inscribieron 94.000 personas. La elección reducirá en dos años el período del actual Consejo Legislativo, cuyos miembros no oficiales fueron elegidos en 1963 para un lapso de cinco años.

Partidos políticos

25. La comunidad de naturales de Viti en las Islas Viti tiene tres partidos políticos: la Asociación de Viti, el Partido Democrático de Viti y el Partido Progresista de Viti. El partido principal, la Asociación de Viti, se constituyó a finales de 1950. No se dispone de datos en cuanto al número de sus miembros. El Partido Democrático de Viti se estableció aproximadamente hace tres años y afirma que cuenta con unos 4.000 miembros que cotizan. El Partido Progresista de Viti se formó en 1965, pero no se dispone de mayor información a su respecto.

26. La comunidad india de las Islas Viti tiene diversos partidos o agrupaciones políticas que incluyen el Partido de la Federación, el Partido del Congreso Nacional, el Partido Democrático Occidental de Viti, el Partido de Minoría de Viti y el Frente Político Musulmán Pan-Viti. El principal es el Partido de la Federación. Aunque no se dispone de datos sobre su actual

composición, sus miembros ocupaban cuatro cargos en el Consejo Legislativo en 1965. Estos recibieron instrucciones del Partido en abril de 1965 de no celebrar ninguna discusión sobre asuntos constitucionales con otros miembros del Consejo Legislativo en las Islas Viti, sino "formular todas las reclamaciones y presentaciones que estimen pertinentes y adecuadas según su criterio sobre todos los asuntos que se discutan" en la Conferencia de Londres. El Partido, entre otras cosas, patrocina un registro común y se opone a un registro comunal en las Islas Viti.

27. El Partido del Congreso Nacional se formó en 1964. Se dice que está en pugna con el Partido de la Federación. En un memorando publicado en 1964 declaró que el Gobierno del Reino Unido debería conceder sin dilación el gobierno propio interno a las Islas Viti. No se dispone de antecedentes respecto del número de sus miembros.

28. La formación del Partido Democrático Occidental de Viti se hizo observar en 1963⁴. No existe información reciente sobre este particular.

29. El Partido de Minoría de Viti, en un memorando dirigido al Secretario de Estado del Reino Unido para las Colonias, apoyó la representación separada para los musulmanes en el Consejo Legislativo y el mantenimiento "por ahora" de los registros electorales comunales. Después de la Conferencia de Londres, se informa que el partido ha considerado esta última como una victoria de la cordura y la cooperación y encareció a los musulmanes que aceptasen la nueva Constitución para las Islas Viti y le prestaran toda su adhesión y apoyo. Se carece de antecedentes sobre la composición del partido.

30. A finales de 1965 se creó un nuevo partido político que se autodenomina Frente Político Musulmán Pan-Viti. El partido admite a todos los musulmanes de las Islas Viti. Se informa que el partido se opone a las condiciones de la nueva Constitución que suspende la práctica por la cual el Gobernador nombraba a un musulmán representante en el cuerpo Legislativo. En una resolución aprobada en diciembre de 1965 se pidió a los musulmanes en general que se abstuvieran de inscribirse en el registro comunal indio y que por conducto del Gobernador de las Islas Viti pidieran al Gobierno del Reino Unido, en nombre de los musulmanes de Viti, que sus derechos e intereses se protegieran y reconocieran separadamente de los de la comunidad india de las Islas Viti, y que se adoptaran disposiciones constitucionales para ampliar un sistema electoral que garantizase la participación de los musulmanes en el cuerpo legislativo de las Islas Viti.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁵

Introducción

31. El Comité examinó la cuestión de las Islas Viti en sus sesiones 410a, 412a., 413a., 461a., 462a., 463a., 469a. y 483a., entre el 6 de mayo y el 30 de noviembre de 1966.

⁴ *Ibid.*, *decimoctavo período de sesiones, Anexos*, Addendum al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1, cap. VII, párr. 19.

⁵ La siguiente petición fue distribuida después que el Comité Especial había aprobado una resolución sobre las Islas Viti (véase párr. 120 *infra*) en su 463a. sesión, celebrada el 7 de septiembre de 1966: Sr. A. Razaak, Secretario, Fiji Muslim Political Organization (A/AC.109/PET.599).

Declaraciones generales de los miembros

32. El representante del Reino Unido dijo que no tenía mucho que añadir a las declaraciones que su delegación formuló sobre las Islas Viti en la Cuarta Comisión en noviembre de 1965⁶. En aquella ocasión, la delegación del Reino Unido describió las decisiones adoptadas en la Conferencia Constituyente celebrada en julio y agosto de 1965, resumidas en el documento de trabajo de la Secretaría (véase párrs. 7 a 16 *supra*). Esa Conferencia tuvo como objetivo elaborar un marco constitucional para las Islas Viti que permitiese mantener los vínculos con el Reino Unido y conseguir nuevos progresos hacia la autonomía interna. En virtud de los nuevos arreglos, se implantará el sufragio universal. Casi todos los miembros del Consejo Legislativo serán nombrados por elección, y habrá más representantes elegidos para cada una de las tres principales comunidades de las Islas Viti. A la comunidad india le corresponderá el mismo número de miembros que antes en proporción con el total. Al grupo integrado por los naturales de las Islas Viti le corresponderán, proporcionalmente, más asientos que antes, a expensas de la comunidad europea, para tener en cuenta los nuevos votantes inscritos en el censo de naturales de las Islas. Añadió que una innovación muy importante desde el punto de vista del futuro desarrollo político de las Islas Viti era que uno de los elementos integrantes del Consejo Legislativo sería elegido, por vez primera, por las tres comunidades. Esta medida tenía por objeto fomentar la aparición de dirigentes políticos que contaran con las simpatías de todos los sectores de la población y no de una sola comunidad. La experiencia en otras partes había demostrado que este sistema podía resultar muy eficaz para salvar las diferencias entre comunidades distintas y para fomentar un sentimiento nacional único. El Gobierno del Reino Unido declaró que el propósito de su Gobierno era contribuir a alcanzar este objetivo en las Islas Viti. Finalmente, la nueva Constitución contendría una declaración de derechos y una serie de disposiciones para implantar un sistema ministerial.

33. Añadió que esas nuevas medidas electorales iban más allá de lo que deseaban los representantes de la comunidad indígena y europea en la Conferencia, pero no llegaban a colmar los deseos de los representantes del grupo indio. Si bien los indígenas y los europeos reconocieron que las elecciones a base de un registro común, tal como proponían los representantes indios, constituían un objetivo deseable a largo plazo, no se pusieron de acuerdo sobre la implantación de este sistema en el momento actual o en una fecha cercana. En vista de estas actitudes encontradas, había que aclarar que las decisiones del Gobierno del Reino Unido en la Conferencia, tomadas después de discutir y examinar la cuestión a fondo, respondían a los deseos expresados por la gran mayoría en las Naciones Unidas y en el Comité Especial. Esas decisiones no representaban una victoria de ningún grupo particular de la población de las Islas Viti sobre otro. El objetivo constante del Reino Unido era fomentar la cooperación y la confianza entre toda la población, sea cual fuere su origen étnico. Gracias a las decisiones de la Conferencia se alcanzaría este objetivo al tiempo que se mantendrían los progresos realizados hacia la autonomía interna.

⁶ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Cuarta Comisión, sesiones 1558a. y 1570a.*

34. Declaró que se estaban tomando las medidas necesarias para aplicar las decisiones de la Conferencia. A fines de noviembre de 1965 se había promulgado el Real Decreto que permitiría celebrar las elecciones, y al mes siguiente se habían publicado los nuevos reglamentos electorales. El registro de electores se hizo durante los primeros cuatro meses de 1966; se inscribió al 84% aproximadamente de los posibles electores. Los censos electorales provisionales se estaban preparando a base de este registro y debían estar listos para su publicación a fines del verano. Se dejaría un plazo para decidir acerca de las objeciones que pudieran hacerse a los censos, los cuales se publicarían después en forma definitiva. El Consejo Legislativo en vigencia se debía disolver a fines de agosto de 1966; el 12 de agosto se designarían los candidatos para el nuevo Consejo; la votación se celebraría del 26 de septiembre al 8 de octubre, y la Asamblea Legislativa se reuniría a principios del mes siguiente.

35. No había desacuerdo en el Comité Especial en cuanto a las metas y objetivos. Todos reconocían que debía alentarse a las distintas comunidades de las Islas Viti — que tenían culturas independientes, distintos modos de vida y bastante desconfianza mutua — a cooperar en una atmósfera de confianza y armonía. Todos estaban de acuerdo en que el proceso de allanar las diferencias debía seguir adelante por la vía del progreso constitucional con miras a establecer un gobierno más representativo y responsable en las Islas Viti. Si había desacuerdo, se refería únicamente a cuál era el mejor modo de alcanzar los objetivos. A juicio del Reino Unido, una actitud moderada tenía grandes probabilidades de éxito: no debía aceptarse la inevitabilidad de las divisiones y garantías, pero tampoco debían forzarse los acontecimientos hasta el punto de suscitar más temores. En septiembre de 1965 el Secretario para las Colonias del Reino Unido había declarado que la cooperación conduciría a la integración política y a la armonía racial, y demostraría que las votaciones interraciales no perjudicaban a los intereses de ninguna raza.

36. El orador esperaba que en los debates del Comité se llegase a un acuerdo considerable sobre el carácter de la situación y el sentido en que debía procurarse que ésta evolucionara. Si el Comité había de cumplir la función positiva para la que se había creado, y servir a los verdaderos intereses de la población de las Islas Viti, debería definir las esferas de común acuerdo, fijar las metas comunes y refrendar los objetivos y directrices que acababa de describir el orador.

37. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que, a juzgar por la declaración del representante del Reino Unido (véase párrs. 32 a 36 *supra*) la situación en Viti permanecía virtualmente sin cambios en lo tocante a descolonización. El representante de la Potencia Administradora alegó que no podían tomarse medidas para poner en práctica las resoluciones 1514 (XV) y 1591 (XVIII) de la Asamblea General hasta haber logrado la plena integración de las diversas comunidades. No obstante, era el propio Gobierno del Reino Unido el que buscaba acentuar la separación de las comunidades, con la introducción de la representación comunal. Si existía una “desconfianza mutua” entre la población de las Islas Viti, era la Potencia Administradora la que la provocaba. El representante del Reino Unido, por lo tanto, no debía imaginarse que su opinión merecía la aprobación colectiva del Comité Especial.

38. En la resolución 1951 (XVIII) de la Asamblea General se invita a la Potencia Administradora a tratar de “... lograr la integración política, económica y social de las distintas comunidades”. Sin embargo, con el sistema de representación tripartita antes se alentaría — y no se reduciría — la desunión, dando ejemplo de la máxima colonialista de “dividir para reinar”. La Potencia Administradora trataba de acentuar el origen étnico de los diferentes sectores de la población. El 92% de la llamada comunidad india, no obstante, había nacido en el Territorio, por ello, eran tan autóctonos como cualquier otro grupo de las Islas Viti. El propósito de estas diferencias era asegurar a la minoría europea, que comprendía a menos del 9% de la población, la continuación de su explotación de los recursos de las Islas Viti. Todavía estaba fresco en la memoria del Comité el ejemplo de Rhodesia del Sur.

39. El representante del Reino Unido había sugerido que el Comité Especial buscara el máximo común denominador. A juicio del orador, el máximo común denominador entre las naciones amantes de la libertad podía encontrarse en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Si la Potencia Administradora aplicara los principios allí cristalizados, surgirían las Islas Viti en libertad.

40. El representante de la India dijo que la declaración del representante del Reino Unido no añadía nada importante a la descripción de la situación de las Islas Viti y eludía totalmente la obligación de la Potencia Administradora de presentar un informe acerca de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General. Citó un pasaje de una declaración del Secretario General de las Naciones Unidas que, al tiempo que alababa los progresos hechos por el Reino Unido en la esfera de la descolonización, señalaba también la excepción de Rhodesia del Sur, que oscurecía ese historial. Añadió que su delegación estaba, en general, de acuerdo con esa apreciación, pero estimaba que la situación de las Islas Viti constituía asimismo mancha en la actuación de la Potencia Administradora. La falta de todo progreso constitucional en las Islas y la visible determinación de la Potencia Administradora de eludir responsabilidades derivadas de las distintas resoluciones de la Asamblea General constituían — al igual que la situación de Rhodesia del Sur — una lamentable excepción en el historial, por otra parte digno de alabanza, del Reino Unido en lo relativo a la descolonización. Las últimas declaraciones del representante del Reino Unido en el Comité Especial demostraban que la Potencia Administradora ni estaba dispuesta a cumplir ni había cumplido las disposiciones contenidas en las resoluciones 1514 (XV), 1951 (XVIII) y 2068 (XX) de la Asamblea General. Ese era un fallo esencial y clave que impedía a la Potencia Administradora hacer una declaración completa y detenida sobre la situación de las Islas Viti.

41. En la resolución 1951 (XVIII) se invitaba a la Potencia Administradora a elaborar una nueva constitución que dispusiera la realización de elecciones libres a base del principio de “un voto por persona” y la creación de instituciones representativas. En lugar de ello, la Potencia Administradora había introducido un sistema electoral que dividía a la población de las Islas Viti siguiendo líneas comunales y raciales y que concedían a ciertos intereses atrincherados, particularmente a los europeos, mayores poderes de voto que al resto de la población, sistema que recordaba el implantado

en Rhodesia del Sur, gracias al cual la minoría racista pudo tomar el poder ilegalmente a expensas de la mayoría. Hasta la fecha los europeos de las Islas Viti las habían gobernado en la forma más absolutista. Después de las llamadas reformas electorales, que supuestamente introducían un limitado gobierno propio interno, los europeos y sus aliados raciales, o sea el 4% de la población total, retendrían tanto como el 30% de los asientos electivos en el Consejo Legislativo mientras que más del 50% de la población sólo tendría 12 asientos. Una vez más, el complicado sistema de votación mixta recordaba una característica similar en la Constitución de 1961 de Rhodesia del Sur. En esta forma, las "reformas" constituían una estratagema demasiado conocida, destinada a perpetuar el dominio de la minoría europea por medio de artimañas constitucionales.

42. El representante de la Potencia Administradora atribuyó gran importancia a las "actitudes en conflicto" de las comunidades de autóctonos de las Islas Viti y de indios, frente a las cuales los europeos, como comunidad de amos, se mantenían aparte. Como lo señaló el representante de Tanzania, sin embargo, todos los habitantes de las Islas Viti, sin tener en cuenta su origen racial, eran naturales de Viti. Por ello no era correcto referirse al pueblo de origen indio radicado en las Islas Viti como "la comunidad india". Eran indios sólo en el sentido de que sus antepasados habían sido llevados a las Islas Viti desde el subcontinente de la India, para trabajar allí, como mano de obra contratada, en las plantaciones de propiedad europea. Era típico de la política colonial que los europeos establecidos en Rhodesia se convirtieran en naturales de Rhodesia, mientras que las personas de origen indio que habían ido a las Islas Viti seguían siendo indios. El uso del término "comunidad india" tenía el propósito de instigar el odio comunal, que felizmente no existía en la raíz.

43. La Asamblea General también había invitado a la Potencia Administradora a crear instituciones representativas. El restringido gobierno propio interno concedido a un Consejo Legislativo, claramente no representativo e impotente, difícilmente podía ser considerado como "instituciones representativas" en el sentido de la resolución 1514 (XV). No solamente no tenía la población de las Islas Viti ni la sombra ni la substancia de un verdadero control democrático, sino que la Potencia Administradora anunciaba que no veía la posibilidad de que hubiera un cambio en este sentido en una fecha cercana.

44. Añadió que la Asamblea General había invitado, en la misma resolución, a la Potencia Administradora a tratar de lograr la integración política, económica y social de las distintas comunidades. La escasa información proporcionada por la Potencia Administradora demostraba que se había hecho muy poco en esa esfera de importancia capital. Por el contrario, se había hecho mucho para dividir a la población de las Islas Viti siguiendo líneas comunales y raciales. Esa política, que no era nada nueva en la historia de la administración colonial británica, podía resumirse en la máxima "dividir para reinar". Siempre que el Reino Unido abandonaba de mala gana el control, plantaba deliberadamente la discordia para crear dificultades futuras a los países recién independizados. No era por casualidad como lo señalara el Secretario General que todas las operaciones de mantenimiento de la paz que se estaban efectuando eran consecuencia de problemas originados en el proceso de la descolonización británica. No obs-

tante, esa Potencia Administradora, al tiempo que aplicaba esos métodos envejecidos por el tiempo a la población de las Islas Viti, deseaba hacer creer al Comité Especial que el aparato de división implantado en el Territorio tenía el propósito de alentar la cooperación y la confianza en toda la población, sea cual fuere su origen étnico, y que la experiencia demostraba que un sistema de este tipo podía ser muy eficaz para eliminar las divisiones entre las diferentes comunidades y promover la intensificación de la unidad nacional. En realidad las diferencias comunales habían sido creadas y sostenidas artificialmente por la Potencia Administradora, que explotaba las tensiones así provocadas con objeto de aferrarse a sus dominios. La historia del colonialismo británico estaba llena de ejemplos de naciones desmembradas y pueblos artificialmente divididos. La Potencia Administradora había creado en las Islas Viti instituciones educativas y órganos de gobierno basados en doctrinas comunales y raciales. El orador se refirió, al respecto, a las declaraciones del representante de Chile en 1963 ante el Comité Especial, y del representante de Ceilán en la Cuarta Comisión, en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General.

45. La mejor manera de averiguar los hechos era que el Comité Especial, o uno de sus subcomités, visitara al Territorio y mantuviera conversaciones con los gobernantes y los gobernados, en todos los niveles. Si la Potencia Administradora era sincera y deseaba que el Comité conociera los hechos, no debía objetar esa visita. La delegación de la India, por su parte, aceptaría las conclusiones de una misión visitadora de este tipo.

46. El informe del Comité Especial a la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Viti podría tal vez aplazarse hasta el retorno de la misión visitadora. El Comité también podría acceder al pedido del representante del Reino Unido, en lo relativo a la intención del Comité de dar cuenta a la Asamblea General del cumplimiento de la resolución 2068 (XX), de que se estableciera un plazo más largo, de modo que la Potencia Administradora pudiera tomar medidas que permitieran la participación de personas con conocimiento especial del Territorio en el debate del Comité. El Comité podría retomar el tema después de regresar de África.

47. Para terminar, el orador subrayó que no existía un acuerdo entre el Comité Especial y la Potencia Administradora sobre una evaluación básica de la situación en las Islas Viti. Si el Comité Especial realmente había de "servir los verdaderos intereses del pueblo", debía negarse a condonar el incumplimiento, por la Potencia Administradora, de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y recomendar medidas para la rápida y completa aplicación de la resolución 1514 (XV).

48. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la actitud de su delegación frente a la cuestión de las Islas Viti reflejaba su política de apoyo universal a los pueblos que luchaban por su libertad e independencia. Un análisis objetivo de la situación en las Islas Viti revelaba que la Potencia Administradora recurría a toda suerte de maniobras para impedir la aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

49. Contrariamente a las afirmaciones del representante de la Potencia Administradora, un sistema electoral fundado sobre registros electorales comunales y votación mixta no garantizaba la igualdad en el sufragio ni seguía el principio democrático de "un voto por per-

sona", además de no responder al pedido de la Asamblea General al respecto. La Conferencia Constituyente, convocada casi cinco años después de la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, había hecho totalmente caso omiso de los propósitos y principios de dicha Declaración y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Como se declara en el documento de trabajo (véase párr. 9 *supra*), se había convenido en que "la independencia no era una de las cuestiones que se discutirían en la conferencia de Londres". Como los objetivos de la Conferencia eran limitados, no podía producir resultados positivos.

50. La Conferencia había hecho que la representación de las diferentes comunidades fuera todavía más desigual. Por ejemplo, se recomendó que el Consejo Legislativo incluyera a doce indios elegidos y a diez europeos, aunque los indios constituían el 50% de la población y los europeos sólo el 9,5%. Podía percibirse, pues, que el propósito del llamado "progreso constitucional" era dar al votante europeo ventaja sobre los demás votantes y ayudarlo a cuidar los intereses de la minoría europea en las Islas Viti. El sistema de la votación mixta, mediante el cual se asignaba un número igual de escaños en el Consejo Legislativo a comunidades de diferente volumen, también tenía el propósito de proteger los intereses de la minoría europea. De hecho, un sistema de sufragio y representación tan injusto aumentaba las diferencias políticas entre las comunidades. La única conclusión posible a que podía llegarse era que el Consejo Legislativo no había sido elegido democráticamente, como requerían las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de las Islas Viti.

51. Las facultades del Consejo Legislativo, según se describen en el párrafo 19 *supra*, eran evidentemente inadecuadas y el Gobernador del Reino Unido era todopoderoso en asuntos legislativos.

52. La Conferencia había recomendado que la autoridad ejecutiva continuara oficialmente radicada en el Gobernador, que seguiría nombrando a los miembros no oficiales del Comité Ejecutivo. Además, el Gobernador podía negarse a aceptar el dictamen del Consejo Ejecutivo, si esa negativa se fundaba en "los intereses del orden público, la fe pública o el buen gobierno". En esta forma tendría también un poder ejecutivo ilimitado.

53. La Potencia Administradora, por ello, estaba totalmente equivocada al asignar positiva importancia a la Conferencia Constituyente, que nada había hecho para permitir que la población de las Islas ejerciera su derecho a la libertad y a la independencia en conformidad con las disposiciones de la Declaración. No era por coincidencia que, en su resolución 2068 (XX), la Asamblea General pidiera a la Potencia Administradora que tomara urgentemente medidas para derogar todas las leyes de carácter discriminatorio, que instituyera un sistema incondicional de representación democrática, fundado en el principio de "un voto por persona" y le invitara a aplicar inmediatamente las resoluciones de la Asamblea General. Por amarga ironía del destino, el 16 de diciembre de 1965 — fecha de la aprobación de esa resolución por la Asamblea General — se habían aprobado las recomendaciones de la Conferencia Constituyente relativa a las Islas Viti.

54. Dijo que la economía de las Islas Viti se caracterizaba por el predominio de los monopolios extranje-

ros que, habiéndose apoderado de posiciones clave, continuaban saqueando los recursos naturales y explotando despiadadamente a la población del Territorio. La política de esos monopolios era la que había producido la unilateral economía agraria de las Islas Viti. Todos los beneficios derivados de los minerales del Territorio iban a los cofres de los monopolios extranjeros, principalmente a compañías del Reino Unido, los Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelandia. Las grandes plantaciones eran propiedad del Reino Unido y de otras compañías, y entre las más importantes figuraban la Colonial Sugar Refinery, la Copra Board y la Banana Board. Como resultado de ello, el nivel de vida de la población seguía siendo muy bajo. Los trabajadores ganaban sólo 3 a 3,5 libras semanales, con un horario de trabajo diario de 10 a 12 horas. No había sistema de seguro social en la colonia y los servicios educativos y sanitarios estaban en un estado deplorable.

55. El sistema de tenencia de tierras había convertido el problema agrario en uno de los temas más candentes en las Islas Viti y estaba adquiriendo más y más entonaciones políticas. La mayor parte de la tierra estaba en manos de terratenientes que las arrendaban por un alto precio o de poderosas compañías extranjeras. Quienes trabajaban directamente la tierra estaban obligados a arrendarla en términos excesivamente desfavorables, con el resultado de que se aprovechaba para la agricultura menos del 10% de la tierra aunque el 72% de la tierra podía hacerse arable. Como el sector europeo de la población, y especialmente los monopolios, eran propietarios de unos 375.000 acres de tierra, las autoridades coloniales no hacían nada para resolver el problema de la tierra o para asignar tierra a quienes la trabajaban. Tanto los habitantes autóctonos de las Islas Viti como los de origen indio estaban interesados en la rápida solución de ese problema. Al crear obstáculos artificiales a una solución, la Potencia Administradora trataba de provocar nuevas fricciones entre las comunidades, con objeto de mantener su supremacía en el archipiélago. Sólo una solución justa del problema agrario permitiría a la población de las Islas Viti desarrollar su patria para bien de toda la población y luchar contra la influencia de los monopolios extranjeros. Cualquier demora al respecto perjudicaría gravemente los intereses de la población de Viti en su conjunto y la responsabilidad de ello recaería en la Potencia Administradora.

56. El orador señaló que las Potencias coloniales habían aprendido recientemente a apreciar aún más el valor del Territorio. Las Islas Viti tenían importancia estratégica y estaban situadas en un cruce de la red de transportes de la parte sur del Océano Pacífico. Poseían puertos bien dotados y aeropuertos de primera clase que atraían la atención de los agresores empeñados en una guerra sangrienta contra el movimiento de liberación nacional en el Asia Sudoriental.

57. Ninguna de las medidas recomendadas por la Asamblea General había sido aplicada por la Potencia Administradora. El Comité Especial debía condenar la actitud de esa Potencia como una violación de la Declaración sobre la concesión de la independencia y de las decisiones subsiguientes de la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Viti. Debía pedir a la Potencia Administradora que aplicara incondicionalmente todas las recomendaciones de las Naciones Unidas, permitiendo así a la población de las Islas Viti ejercer su derecho inalienable a la libertad y a la independencia.

58. El representante de Sierra Leona recordó que el 5 de noviembre de 1964 el Comité Especial había aprobado una resolución sobre las Islas Viti en la que invitaba a la Potencia Administradora a cumplir, entre otras cosas, la resolución 1951 (XVIII) de la Asamblea General, que la invitó a preparar una nueva constitución que previera la realización de elecciones libres a base del principio de "un voto por persona" y la creación de instituciones representativas, a que adoptara inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes al pueblo del Territorio y a que tratara de lograr la integración política, económica y social de las distintas comunidades. La resolución 2068 (XX) de la Asamblea General pidió además a la Potencia Administradora que tomase urgentemente medidas para derogar todas las leyes de carácter discriminatorio e instituir un sistema incondicional de representación democrática, fundado en el principio de "un voto por persona". Según el orador la Potencia Administradora no había declarado si todas las leyes de carácter discriminatorio habían sido ya derogadas.

59. Aunque la Conferencia Constituyente celebrada en 1965 había aceptado el principio de "un voto por persona", cabía lamentar que antes de la Conferencia se hubiera decidido que la independencia no era uno de los problemas que habían de examinarse. El hecho de que a todos los adultos de las Islas Viti, cualesquiera fuese su procedencia, se les hubiese de otorgar el derecho a voto, representaba algún progreso, pero dicho progreso se debilitaba por otro hecho: el que aún habría miembros oficiales nombrados por el Gobernador tanto en el Consejo Legislativo como en el Consejo Ejecutivo. A la delegación de Sierra Leona le hubiera agradado que las elecciones que habían de realizarse más tarde en el año diesen por resultado un Consejo Legislativo completamente representativo, sin los cuatro miembros oficiales nombrados por el Gobernador, y que el Consejo de Ministros que más tarde reemplazaría al Consejo Ejecutivo fuese elegido por los miembros electos mismos y no por el Gobernador.

60. En su declaración (véanse párrs. 32 a 36 *supra*) el representante del Reino Unido se había referido a las divisiones entre las diversas comunidades en las Islas Viti, y pareció dar a entender que la unificación de las comunidades sólo podía progresar a paso de tortuga. Al orador le hubiera agradado tener más información acerca de la "desarmonía racial" y la "desconfianza mutua" que supuestamente existían en las Islas Viti.

61. Los objetivos por los cuales debía trabajar la Potencia Administradora eran perfectamente claros: el rápido cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, con particular referencia a las disposiciones de la resolución 1951 (XVIII).

62. Declaró que los principios que habían servido de guía al Comité Especial en su enfoque de las cuestiones coloniales eran tres, o sea la concesión del sufragio universal a los adultos, la afirmación de los derechos de los pueblos autóctonos y la adopción de todas las medidas necesarias para otorgar la libertad e independencia en una fecha próxima. Estos mismos principios debían guiar al Comité Especial en la cuestión de las Islas Viti, y debían realizarse esfuerzos sinceros para vencer divisiones comunales y acelerar el proceso de la independencia, y no entorpecerlo permitiendo que el Gobernador colocara hombres de su elección en el Consejo Legislativo y en el Consejo Ejecutivo. No debía escatimarse ningún esfuerzo para unificar a la población del

Territorio por medios políticos, sociales y educativos, y deberían eliminarse las barreras constitucionales contra la representación democrática.

63. El representante del Reino Unido, respondiendo a distintos puntos planteados en el debate, rechazó por totalmente falsa la argumentación expuesta por los representantes de Tanzania, de la India y de la Unión Soviética, de que el Gobierno del Reino Unido estaba estimulando las diferencias comunales en las Islas Viti, impulsado por diversos motivos egoístas. La verdad era precisamente lo contrario: todos los esfuerzos del Gobierno del Reino Unido se encaminaban a lograr la unificación de las comunidades sobre una base racional, y a preparar una estructura política y constitucional que les permitiera vivir y progresar dentro de la armonía. Las diferencias entre la comunidad india y las autóctonas de las Islas Viti constituían un rasgo esencial de la situación que ninguna Potencia Administradora podía pasar por alto al preparar a las Islas para el progreso constitucional. Añadió que, si lo que había dicho anteriormente acerca de la falta de armonía racial era insuficiente, la información detallada que solicitó el representante de Sierra Leona podía leerse en los documentos de trabajo del presente año y de años anteriores. El Gobierno del Reino Unido no podía hacer caso omiso de los hechos concretos de la situación, ni tampoco debía hacerlo el Comité Especial.

64. Afirmó que, en lo relativo a la posición constitucional, ya había explicado el nuevo sistema de votación mixta para nueve de los 36 puestos del Consejo Legislativo. Tal innovación constituía un paso importante hacia la armonía racial y un sistema electoral unificado, y no acentuaría las divisiones comunales, como se había sugerido. Por el contrario, nada exacerbaría más ciertamente las divisiones comunales que la adopción inmediata de un registro único y común, como proponían los representantes de la India y de Tanzania. Las anomalías que pudieran darse en la representación de las diversas comunidades no acarrearían el dominio de una comunidad sobre las otras. La política del Reino Unido de trabajar por la integración política estimulando la cooperación y la confianza entre las comunidades constituía sin duda alguna la política acertada, y el Gobierno del Reino Unido estaba decidido a mantenerla. Con la ayuda de todos los que se interesaban por las Islas Viti, y con la buena voluntad de todos los que estaban fuera de ellas, se podría progresar; pero a la inversa, el partidismo, la obstrucción y la mala voluntad sólo podrían ser contraproducentes.

65. Manifestó que el argumento de que la Potencia Administradora seguía una política de "dividir para reinar" a fin de explotar los recursos de las Islas, carecía de todo fundamento; su política consistía, por el contrario, en unir a las comunidades y ayudarles a vivir juntas y en paz. En cuanto a los móviles que se le atribuían, declaró que sólo podía afirmar que la ayuda y asistencia que voluntariamente prestaba a las Islas Viti excedían con mucho a todo beneficio que pudiera sacar del comercio o inversiones en el Territorio. Lejos de explotar los recursos, las firmas comerciales prestaban un servicio esencial, y contaban con buena acogida en todas las comunidades; en realidad, difícil sería imaginar la economía de las Islas Viti sin esas firmas.

66. Dijo que el representante de la Unión Soviética había formulado una curiosa acusación en el sentido de que las Islas Viti tenían una importancia estratégica un tanto siniestra para el Gobierno del Reino Unido.

Era cierto que las Islas poseían un buen aeródromo y buenos puertos, lo que mal podría desagradar al representante de la Unión Soviética, pero el Reino Unido no tenía en las Islas Viti ni tropas, ni barcos de guerra, ni aviones militares, ni bases o instalaciones de ninguna especie. El representante de la Unión Soviética había tratado también de sugerir que, al no desarrollar los recursos minerales y al estimular el desarrollo de la agricultura, los intereses extranjeros habían practicado una especie de explotación del pueblo. La realidad era que tanto la agricultura como la minería se estaban desarrollando en beneficio de todo el pueblo de las Islas, y que las exportaciones de oro constituían una valiosa contribución a los ingresos de divisas.

67. Añadió que deseaba asegurar al representante de la India de que el empleo del término "comunidad india" para describir a aquella parte de la población de origen indio no escondía ninguna intención aviesa; desgraciadamente, no existía un término para definir a los habitantes de las Islas Viti sin indicación de su origen étnico. El objetivo del Reino Unido era promover el progreso político y constitucional lo más rápidamente posible, a fin de que no se destacara tanto el origen étnico.

68. Declaró que el representante de la India había incurrido en un error al afirmar que la Potencia Administradora había anunciado que no existía ninguna posibilidad de "control democrático" en una fecha cercana; el objetivo del Gobierno del Reino Unido era precisamente todo lo contrario. Tampoco era verdad que el Reino Unido no se propusiera acelerar el proceso de concesión de la libertad e independencia al pueblo de las Islas Viti; esa interpretación de la política del Gobierno del Reino Unido era totalmente inaceptable.

69. El empleo que había hecho el representante de la India del lema "dividir para reinar" no se aplicaba en absoluto a la política actual ni a la pasada del Reino Unido; eran muchos los países que habían estado en un tiempo bajo la administración del Reino Unido: la India era uno de ellos y eso demostraba claramente que las comunidades distintas podían vivir, y vivían juntas en completa armonía. Las Naciones Unidas, y en particular el Comité Especial, debían mirar tales ejemplos como dignos de emulación, más bien que detenerse en unas pocas excepciones.

70. La política del Gobierno del Reino Unido era clara, firme y lógica: era una política de estímulo a la cooperación y de eliminación de los obstáculos a la confianza entre las diversas comunidades. Correspondía a quienes acusaban al Reino Unido de perseguir secretamente la política opuesta señalar alguna razón aceptable que justificase tal acusación. Los objetivos del Reino Unido en las Islas Viti no podían alcanzarse de la noche a la mañana, pero estaban claramente definidos como objetivos de progreso hacia el gobierno propio y hacia la integración y la armonía políticas.

71. El representante de la India declaró que le complacía que el representante del Reino Unido hubiese admitido la existencia de anomalías en la representación de las diversas comunidades, lo cual constituía el fondo de todo el problema. En consecuencia, el orador estimaba que tenía razón al afirmar que la política del Reino Unido consistía en fomentar las divergencias comunales donde no existían, y en aumentarlas y explotarlas cuando estaban presentes.

72. En la declaración del representante del Reino Unido se destacaron en forma poco afortunada las di-

ferencias comunales más que la reforma constitucional. El sistema de votación mixta, que supuestamente había de estimular la armonía comunal y conducir finalmente a una nación unificada, no era nuevo y había sido implantado en otros territorios bajo administración del Reino Unido. Las Naciones Unidas no habían tenido una feliz experiencia con dicho sistema en otros territorios, y nada indicaba que el caso sería distinto respecto a las Islas Viti. Además, el orador no podía aceptar la sugerencia del representante del Reino Unido de que era un error propiciar la idea de un solo registro electoral, pues la aplicación directa del principio de "un voto por persona" era lo que pedían, no sólo la India sino prácticamente todos los Miembros de las Naciones Unidas.

73. Por cuanto apreciaba el loable historial del Reino Unido en lo relativo a la descolonización, a la delegación de la India le había sido difícil emplear el término "dividir para reinar", pero desgraciadamente la historia pasada, con inclusión de la de su propio país, atestiguaba el hecho de que el Reino Unido había seguido en casi todos sus territorios una política de estímulo y explotación de las diferencias entre comunidades. En lo relativo a los términos que se empleaban para describir a las diversas comunidades de las Islas Viti, sabía bien el orador que no había, desgraciadamente, otro medio de describirlas, pero el representante del Reino Unido tenía indudablemente que saber dónde residía la responsabilidad por esa situación.

74. En cuanto al hecho de que el representante del Reino Unido rechazara la afirmación del orador de que el Gobierno del Reino Unido había declarado que no había posibilidad de control democrático en una fecha cercana, el orador remitió al Comité a la primera declaración del representante del Reino Unido (véase párrs. 32 a 36 *supra*).

75. Si el Reino Unido fuera sincero en su convicción de que las diferencias comunales habían existido en las Islas Viti desde tiempo inmemorial, de que estaba haciendo todo lo posible para promover la armonía comunal en las Islas, y de que la introducción de un sistema electoral sobre la base directa de "un voto por persona" tendría consecuencias desastrosas para el pueblo, debía también aceptar el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas que consultaría a los representantes de todas las comunidades de las Islas Viti e informaría acerca de sus conclusiones a las Naciones Unidas. La India estaba dispuesta a aceptar las conclusiones de ese órgano imparcial, y esperaba que también el Gobierno del Reino Unido consentiría en ello, pues ése era quizás el único medio de convencer a las Naciones Unidas de que la política de aquel país estaba inspirada en el bien del pueblo de las Islas Viti. Desgraciadamente, había indicios de que el Gobierno del Reino Unido no aceptaría ninguna misión visitadora y esa negativa no exigía comentario.

76. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que su delegación mantenía las ideas que había expresado en la sesión anterior, pues éstas se basaban en hechos bien conocidos que el representante del Reino Unido no había incluso tratado de negar en la declaración que acababa de hacer.

77. Añadió que su delegación no podía considerar la declaración del Reino Unido más que como una tentativa para distraer la atención del Comité de la cuestión principal, o sea saber en qué forma la Potencia

Administradora estaba cumpliendo las resoluciones de la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Viti.

78. El representante del Reino Unido había tratado de dar la impresión de que sólo él tenía la razón y que todos los demás oradores sobre la cuestión de las Islas Viti estaban equivocados. Sin embargo, de los debates de la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones se desprendía claramente que las demás delegaciones consideraban que las Potencias administradoras, y principalmente el Reino Unido, recurrían a diversos subterfugios para evitar el cumplimiento de la Declaración sobre la concesión de la independencia y de otras resoluciones de la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Viti.

79. Si todo marchaba bien en las Islas Viti, el orador no veía por qué razón el representante del Reino Unido no invitaba al Comité a que enviara una misión visitadora al Territorio, para que se cerciorase de la situación política, económica y social de las Islas.

80. El representante del Reino Unido declaró que parecía que las observaciones del representante de la India no eran sino una mera repetición de la exposición anterior de la delegación de la India; un cuidadoso estudio de la declaración del Reino Unido podría quizás convencer al representante de la India de que los objetivos de los dos países al respecto eran idénticos. La acusación de la India de que el Gobierno del Reino Unido estaba explotando las diferencias comunales en las Islas Viti en provecho propio carecía de fundamento, pues el Reino Unido no sacaba ni podría sacar ventaja alguna de tales diferencias.

81. En cuanto a la observación del representante de la Unión Soviética de que el Reino Unido parecía pensar que tenía la razón y que todos los demás estaban equivocados, el orador había estudiado las tres declaraciones hechas en la 412a. sesión del Comité Especial, pero no había podido encontrar un solo hecho que apoyara las acusaciones contra el Reino Unido.

82. El Reino Unido estaba tratando de tomar un rumbo que quedaba dentro de los puntos de vista de dos comunidades, encaminadas ellas mismas por rumbos que no eran opuestos. El objetivo de su Gobierno consistía en impulsar a esas dos comunidades por el mismo rumbo, y el orador estaba convencido de que, si el Comité reflexionaba, concluiría que ese era el rumbo acertado.

83. El representante de Bulgaria apuntó que lamentaba el que el Reino Unido no hubiese cumplido la resolución 2068 (XX) de la Asamblea General, sobre todo el párrafo 4 de su parte dispositiva, en el que se pide a la Potencia Administradora tomar urgentemente medidas para derogar todas las leyes de carácter discriminatorio e instituir un sistema incondicional de representación democrática, fundado en el principio de "un voto por persona". La Asamblea había tenido que formular esa recomendación porque los resultados de la Conferencia Constituyente celebrada en el verano de 1965 habían sido diametralmente opuestos a todas sus resoluciones sobre el asunto y, en particular, al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1951 (XVIII). La cuestión de la independencia del pueblo de las Islas Viti, según se afirmaba en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 1951 (XVIII), había sido excluida expresamente del programa de la Conferencia. Además se había prohibido no sólo la mención de la independencia sino incluso toda idea de autonomía in-

terna. El propósito de la Conferencia y de las recomendaciones que habían aprobado los participantes en ella había sido no abrir la vía a la independencia, sino hacer meramente ciertos ajustes en el sistema colonial del Reino Unido. Los representantes del pueblo de las Islas Viti que habían asistido a la Conferencia habían sido designados a base del viejo sistema legislativo que favorecía a una comunidad a expensas de las demás, lo cual debía, precisamente, corregir la Conferencia.

84. El sistema electoral elaborado en la Conferencia, en violación de las recomendaciones de la Asamblea General, dividía a la población por comunidad y raza, y daba a los europeos, que constituían el 4% de la población, el 30% de los puestos electivos en el Consejo Legislativo, mientras que los miembros oficiales que había de nombrar la Potencia Administradora serían también europeos. Como ocurría en Rhodesia del Sur y en otras partes, la Potencia Administradora sólo tenía un objetivo: perpetuar la dominación política y económica por la minoría blanca. La experiencia recogida en Sudáfrica y en Rhodesia del Sur había demostrado que en esos casos las minorías europeas tenían los mismos intereses que el país metropolitano y que este último podía utilizar a esas minorías para explotar las riquezas de los países de que se trataba, para sus propios fines de orden estratégico u otro. La delegación de Bulgaria no podía aceptar la declaración del representante del Reino Unido en la 410a. sesión, según la cual no había desacuerdo alguno entre la Potencia Administradora y los demás miembros del Comité en materia de propósitos y objetivos; el desacuerdo entre ellos era muy apreciable y persistiría hasta que el Reino Unido aplicara las recomendaciones pertinentes de la Asamblea General, sobre todo la relativa al principio de "un voto por persona".

85. Como la información recibida hasta la fecha por el Comité acerca del Territorio procedía casi enteramente de la Potencia Administradora, el representante de Bulgaria apoyó la sugestión del representante de la India en el sentido de que se considerase la posibilidad de enviar una misión visitadora al Territorio.

86. El representante de la República Árabe Siria señaló que las Islas Viti eran uno de esos territorios respecto de los cuales las Naciones Unidas habían tomado una posición inequívoca de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, la cual representaba un jalón en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Sin embargo, la Potencia Administradora se arrogaba el derecho a administrar el Territorio como le parecía conveniente, haciendo caso omiso de los deseos de las Naciones Unidas. La situación suscitaba muchas cuestiones fundamentales, de las cuales — no la menor — era la cuestión de saber hasta qué punto podía un Estado Miembro pasar por alto las decisiones adoptadas por un órgano mundial, sobre todo una gran Potencia que había participado activamente en la fundación de las Naciones Unidas y aceptado voluntariamente sus principios, además de comprometerse sin reservas a cumplir sus obligaciones. Por la resolución 2068 (XX) no se había designado a la Potencia Administradora para mediar supuestas diferencias comunales en las Islas Viti; se le había pedido adoptar medidas para derogar todas las leyes de carácter discriminatorio e instituir un sistema incondicional de representación democrática, fundado en el principio de "un voto por persona". Era urgente implantar un sistema incondicional de repre-

sentación democrática, no nombrar un gobernador extranjero omnipotente para ejercer el poder ejecutivo y nombrar a los miembros del llamado Consejo Ejecutivo según lo estimase conveniente: un Gobernador con autoridad para destituir a los miembros de ese Consejo cuando, conforme a su opinión única, actuaran contra los intereses del orden público, de la fe pública o del buen gobierno. El orador añadió que cabía recordar que, en un caso que todavía no había sido resuelto, se había encarcelado a unas personas inocentes en nombre de un lema análogo, o sea "seguridad pública". En ese contexto, "seguridad" había llegado a significar, claramente, seguridad para perpetuar la dominación colonial y los privilegios de los extranjeros. El representante de la Potencia Administradora afirmaba que la política de su Gobierno en las Islas Viti tenía por objeto dar a las distintas comunidades la posibilidad de vivir y progresar en armonía, pero a juicio del orador el sistema de votación mixta y la división del electorado sobre una base comunal bien podría producir el resultado opuesto.

87. Otro punto de divergencia entre la Potencia Administradora y los demás miembros del Comité era la posibilidad de que las instalaciones portuarias en las Islas Viti pudieran convertirse en bases militares. El representante de la Potencia Administradora había dado seguridades solemnes de que esas instalaciones no se utilizarían para fines militares, pero a otros miembros del Comité les preocupaba, justificadamente, esa perspectiva.

88. En vista de esas divergencias, el orador apoyó la sugestión del representante de la India en el sentido de que se enviara una misión visitadora al Territorio para averiguar cuál era la situación real. La acogida que le diera la Potencia Administradora serviría para medir realmente sus intenciones.

89. El representante del Uruguay manifestó que, aunque coincidía plenamente con la posición de principio adoptada por los representantes de Bulgaria y de Siria, y apoyaba las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, era esencial que el Comité aceptara los hechos de la situación en las Islas Viti para poder pasar a debatir la interpretación jurídica de esos hechos. Más concretamente, el Comité debiera basar cualquier nuevo debate en el máximo conocimiento posible de las medidas adoptadas por la Potencia Administradora en cumplimiento de la resolución sobre las Islas Viti aprobada por el Comité el 5 de noviembre de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. XIII, párr. 119). Sólo cuando tuviese pruebas inequívocas del progreso constitucional logrado en las Islas Viti a fin de preparar a los habitantes para la libre determinación y la independencia podría el Comité evaluar las futuras perspectivas del Territorio. El Comité debía asegurarse de que el estatuto de independencia que se concediera a las Islas Viti en virtud de su Constitución no fuera meramente teórico, como en el caso de Chipre, que estaba gobernada por una Constitución impuesta al pueblo en virtud de un tratado firmado por otras Potencias. El pueblo de las Islas Viti debía poder optar, en elecciones libres, por la Constitución que deseaba darse para ejercer su libre determinación. Como parecía haber una divergencia de opinión entre los representantes de Bulgaria y Siria y el representante de la Potencia Administradora en cuanto a la Constitución que proponía esta última, el Comité haría bien en no tomar ninguna medida apresurada y en aclarar los hechos de la situación.

90. El representante de Polonia apuntó que su país había apoyado siempre a los pueblos que luchaban por liberarse de la dominación colonial. Pese a los esfuerzos de la Asamblea General y del Comité Especial, la situación en las Islas Viti no había cambiado mucho. La Potencia Administradora no había aplicado las resoluciones 1514 (XV) y 1951 (XVIII) de la Asamblea General; por el contrario, recurría a muchos medios para demorar la independencia de las Islas Viti y crear una estructura gubernamental que salvaguardase en el porvenir los intereses económicos y militares británicos.

91. El asunto más importante tratado en la Conferencia Constituyente de Londres de 1965 no había sido la independencia de las Islas Viti sino la forma de preservar las desigualdades en la representación de las distintas comunidades en el Consejo Legislativo. En las Islas Viti, un voto europeo era igual a seis votos no europeos, y la situación privilegiada de la minoría europea estaba reforzada aún más por el sistema de votación mixto y por la posición dominante del Gobernador británico en el Consejo Ejecutivo. Ello provocaría el antagonismo racial y no la "integración social de las distintas comunidades" recomendada en el inciso c) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1951 (XVIII) de la Asamblea General. El representante del Reino Unido había dicho, en la 413a. sesión, que la Potencia Administradora preparaba a las Islas para que adelantaran por la vía constitucional hacia un gobierno representativo y más responsable. Sin embargo, dicha Potencia no había dado ninguna prueba de que aplicara las disposiciones del inciso b) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1951 (XVIII) de la Asamblea General.

92. El orador apoyó la sugestión del representante de la India de que se enviase a las Islas Viti una misión visitadora para que estudiara directamente la situación; y se declaró dispuesto a apoyar cualquier otra propuesta que acelerase el proceso de descolonización en las Islas Viti.

93. El representante de Chile señaló que algún progreso se había logrado en las Islas Viti, sobre todo respecto a la implantación del sufragio universal de los adultos. Pero quedaban obstáculos para la democracia absoluta, en particular, por ejemplo, el nombramiento de miembros oficiales por el Gobernador en el Consejo Legislativo y en el Consejo Ejecutivo. Además, en las comunidades principales habría un número mayor de representantes elegidos, y por primera vez las tres comunidades elegirían a uno de los miembros del Consejo Legislativo. Si bien la nueva Constitución contenía una declaración de derechos, así como disposiciones para establecer un sistema ministerial, cabía lamentar que no se hubiese establecido un sistema de representación democrática basado en el principio de "un voto por persona", conforme a lo dispuesto en la resolución 2068 (XX) de la Asamblea General. La presencia continua de miembros oficiales designados por el Gobernador tanto en el Consejo Legislativo como en el Consejo Ejecutivo impediría el avance de las Islas Viti hacia la democracia.

94. La delegación de Chile esperaba que el Reino Unido aplicara cabalmente las resoluciones 1514 (XV) y 1951 (XVIII) de la Asamblea General. Era menester una acción enérgica para conciliar las diferencias entre las distintas comunidades, y, según el orador, una fórmula para ello quizás podría consistir en implantar un sistema electoral basado en la representación

proporcional, conforme al cual todos los habitantes elegirían a sus representantes a base de un registro común. Ello tendería a eliminar las diferencias y animosidades, y crearía, en una forma más democrática, una conciencia nacional y un propósito común.

95. A juzgar por los resultados de la Conferencia Constituyente de 1965 era evidente que la Potencia Administradora trataba de establecer un marco constitucional para dar a la población de las Islas Viti su autonomía interna y mantener al mismo tiempo sus vínculos con el Reino Unido. El orador esperaba que las Islas Viti llegaran a unirse e integrarse en una sola nación capaz de ejercer debidamente sus derechos inalienables a la libre determinación y la independencia.

96. El representante de Madagascar manifestó que las Islas Viti reunían todos los méritos para lograr su independencia. Constituían una entidad geográfica bien definida con una población de cerca de 455.000 habitantes. Ciertos países de Europa, de Asia y de África, con una población igual o menor, estaban disfrutando de su soberanía; por ejemplo, Luxemburgo, Islandia, las Islas Maldivas y el Gabón. Además, las Islas Viti tenían un potencial económico que permitiría a su pueblo conseguir un buen nivel de vida. Su estructura administrativa y política, muy evolucionada, contaba con un Consejo Legislativo que se elegía en su mayor parte por sufragio directo, y un Consejo Ejecutivo.

97. Sorprendía, pues, que la Conferencia Constituyente de 1965 hubiese examinado sólo los aspectos secundarios de la cuestión de la independencia de las Islas Viti. Parecía que la Potencia Administradora siguiese la política del *statu quo*, la cual se apartaba de las disposiciones fundamentales de las resoluciones de la Asamblea General sobre el Territorio. La Potencia Administradora tendía a recalcar el daño que podría causarse a las distintas minorías si se concediese la independencia. Así pues, sostenía que se debería dar un trato especial a ciertas minorías, y que la proliferación de los partidos políticos era indicio de una desunión interna que se agravaría con la independencia. Se decía que en un memorando publicado en 1964 el Partido del Congreso Nacional (National Congress Party) convenía sólo en que se concediera la autonomía interna a las Islas Viti. Según el orador el Comité Especial cuya preocupación era identificar una mayoría capaz de gobernar el país conforme a los principios de la democracia y de lograr la integración política, económica y social de la población, no ignoraba esas maniobras de los grupos minoritarios.

98. Dijo que apoyaba la sugestión del representante de la India de que se enviara una misión visitadora a las Islas Viti para que informase sobre la situación y sobre los obstáculos que entorpecían el avance de las Islas Viti hacia la independencia.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

99. En la 462a. sesión, celebrada el 16 de agosto de 1966, el representante de la República Unida de Tanzania presentó un proyecto de resolución sobre las Islas Viti (A/AC.109/L.320), patrocinado conjuntamente por Afganistán, Etiopía, la India, el Irak, el Irán, Madagascar, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia. En el proyecto se deploraba el incumplimiento, por el Reino Unido, de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General,

y se pedía al Gobierno del Reino Unido que adoptara ciertas medidas, incluso la celebración de elecciones generales a base de un voto por persona, conforme al principio del sufragio universal de los adultos, a fin de formar una asamblea constituyente que se encargase de redactar una constitución democrática. A menos que así se hiciera, les sería muy difícil a las Islas Viti alcanzar la armonía racial en momentos en que la Potencia Administradora agrandaba las diferencias entre las razas. Se pedía también al Gobierno del Reino Unido que diera a las Islas Viti un gobierno representativo, que fijara una fecha próxima para su independencia, y que suprimiera todas las medidas discriminatorias. En el proyecto de resolución se recomendaba la designación de un subcomité, como había sugerido originalmente el orador, para que visitara el territorio y rindiera informe al Comité Especial lo antes posible. Dijo que esperaba que la Secretaría facilitara todos los servicios necesarios para la visita del subcomité a las Islas Viti.

100. El proyecto de resolución merecía un apoyo unánime pues sus disposiciones representaban el mínimo que cabía esperar que el Comité Especial hiciera por el pueblo de las Islas Viti.

101. El representante de la India, hablando en apoyo del proyecto de resolución, indicó que ese texto encerraba el consenso que parecía existir en el Comité Especial. Algunas de sus disposiciones figuraban en resoluciones anteriores. Era hora de que la Potencia Administradora fijase una fecha próxima para la independencia del pueblo de las Islas Viti, a fin de que éste pudiera ocupar su lugar en el concierto de las naciones libres. Aunque la Potencia Administradora afirmaba que los nuevos arreglos constitucionales eran satisfactorios, algunos miembros del Comité Especial habían expresado dudas al respecto. Era necesario, pues, enviar una misión visitadora a examinar directamente la situación para que rindiera informe al Comité Especial.

102. El representante de Australia subrayó el interés que sentía su país por las Islas Viti, dada la proximidad de éstas a Australia. Refiriéndose al inciso b del Artículo 73 de la Carta, según el cual las Potencias administradoras debían ayudar a los pueblos a lograr el gobierno propio teniendo en cuenta sus aspiraciones políticas, señaló que en las Islas Viti el Comité Especial se planteaba un problema particular, causado por el carácter heterogéneo de una población compuesta de 176.000 autóctonos de origen melanesio — los primeros habitantes de la Isla —, 206.000 indios y 36.000 personas pertenecientes a otras razas. Entre esos diversos grupos existían profundas diferencias en materia de raza, cultura y costumbres.

103. Como se sabía, en semejante situación, el principio de gobierno por la mayoría, que Australia hacía suyo, era difícilmente aplicable, más difícilmente, por ejemplo, que en Nueva Guinea o en Papua, donde la población, aunque dividida en numerosas tribus, era esencialmente de origen melanesio.

104. El orador estimaba que el proyecto de resolución tendía a imponer a la población de las Islas Viti una aplicación simplista del principio de la libre determinación. Dudaba que el Comité pudiera estar seguro de que el texto respondía a los deseos y a las aspiraciones de la población de Viti, como preveía el inciso b del Artículo 73 de la Carta. No había indicio de que los 175.000 autóctonos de origen melanesio querían lograr la independencia sobre la base sugerida en el proyecto.

y, por lo que tocaba a los 205.000 habitantes de Viti de origen indio, muchos de ellos tampoco lo deseaban.

105. El Comité no debía imponer a ningún territorio una evolución política que no se ajustase a sus aspiraciones. El orador pensaba que la exhortación — “déjennos decidir” — que había hecho en otra ocasión un peticionario de Granada, bien podía aplicarse a las Islas Viti.

106. La Potencia Administradora no tenía más propósito que el de cumplir sus obligaciones de conformidad con las disposiciones de la Carta; no tenía razón alguna para querer perpetuar el estatuto colonial. El representante de Australia, tras de calificar de mal intencionadas y de absurdas las alegaciones de que se habían levantado fortificaciones en las Islas Viti, observó que en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto se acusaba a la Potencia Administradora de haber impedido que el Territorio lograra la independencia, y que en los párrafos 4, 5 y 6 se recomendaba el envío de una misión visitadora. Dijo que a su juicio el Comité no debería tratar de imponer sus opiniones al Gobierno ni a la población de Viti; a éstos correspondía elegir, cuando lo estimaran oportuno, y sin ninguna presión exterior, su destino. Por esa razón la delegación de Australia no podría apoyar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.320).

107. El representante de Dinamarca apuntó que su delegación, aunque estaba dispuesta a votar a favor del proyecto de resolución, quería formular algunas reservas, sobre todo con respecto al inciso c) del párrafo 3 de la parte dispositiva. Le parecía poco realista fijar en el momento actual una fecha próxima para la independencia de las Islas Viti y, además, muy lamentable, que en el texto no se mencionaran para nada los deseos del pueblo. No se podía negar que los habitantes de las Islas Viti tenían un derecho inalienable a la independencia, como se afirmaba en el párrafo 1 de la parte dispositiva, pero no cabía olvidar que un territorio colonial podía elegir entre varias posibilidades, según disponían las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

108. El representante del Reino Unido recordó que, en sus declaraciones del 6 y del 13 de mayo, la delegación del Reino Unido había expuesto la política seguida por el Gobierno de su país con respecto a las Islas Viti. En primer lugar describió los propósitos y objetivos de esta política; en segundo lugar, demostró que esos propósitos y objetivos no entrañaban ningún elemento que no fuese aceptable para ninguno de los miembros del Comité; en tercer lugar demostró que el Gobierno del Reino Unido se acercaba a estos propósitos y objetivos al ritmo que mejor convenía al Territorio y resultaba más propicio para hacerlos efectivos; y, en cuarto lugar, rechazó las acusaciones que se le habían hecho y sobre todo aquellas según las cuales el Reino Unido quería, para su propio provecho, perpetuar una situación colonial en las Islas Viti.

109. Indicó su deseo de informar al Comité, antes de examinar el proyecto de resolución, de lo que el señor Lee, Secretario para las Colonias, había declarado a los habitantes de las Islas Viti durante una reciente estancia en los territorios del Pacífico. El Sr. Lee afirmó que el Territorio había progresado apreciablemente hacia una viabilidad económica total y las correspondientes instituciones representativas. Aún era demasiado temprano para hacer pronósticos sobre la solución constitucional definitiva del Territorio, pero el progreso

no debería juzgarse desde el exterior. El Reino Unido, con su experiencia secular de la democracia parlamentaria, tenía la misión de ayudar a la población de las Islas Viti a forjar su porvenir común. A tal fin era esencial armonizar las diversas tradiciones de los grupos étnicos de las Islas Viti para crear una conciencia de identidad nacional y formar una nación única con las distintas comunidades. El Secretario para las Colonias había dicho, además, que la nueva constitución ofrecería una base eficaz y democrática de gobierno para los próximos años.

110. La delegación del Reino Unido lamentó que en el proyecto de resolución no se reconocieran las importantes medidas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido, y que sus recomendaciones fueran contrarias a la única política que podría ayudar a lograr los objetivos declarados de su Gobierno. En consecuencia, votaría contra el proyecto de resolución.

111. El representante de la India dijo que las observaciones del representante de Australia le parecían útiles, sobre todo el comentario de que la comunidad india de las Islas Viti consideraba al Territorio, y no a la India, como su patria. Era innegable que en las Islas Viti existían dos comunidades distintas y que la separación no había sido obra de la Potencia Administradora. Sin embargo, el Comité Especial opinaba que la Potencia Administradora no estaba haciendo nada para ligar a ambas comunidades, sino que, al contrario, entorpecía su acercamiento.

112. El representante de Australia había declarado que, en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva, el Comité emitía juicios sobre la Potencia Administradora, pero, el orador pensaba que al emitir juicios con respecto a las situaciones en los territorios coloniales el Comité no hacía más que cumplir con su deber.

113. El Comité creía que sus recomendaciones se ajustaban a las aspiraciones de la población. Sin embargo, si no fuese así, estaba dispuesto a cambiar su posición a base de las conclusiones de una misión visitadora que fuera a las Islas Viti. El hecho de que la Potencia Administradora se hubiese negado a recibir una misión visitadora parecía indicar que había muchas cosas que ocultar al Comité.

114. Después de dar las gracias al representante de Dinamarca, quien había declarado que su delegación estaba dispuesta a votar por el proyecto de resolución aunque lamentaba que no se hubiera mencionado el derecho a la libre determinación de la población de las Islas Viti, el representante de la India contestó al representante del Reino Unido y dijo que, precisamente porque no aprobaba la política de la Potencia Administradora, el Comité formulaba las recomendaciones incluidas en el proyecto de resolución. En cuanto a las declaraciones del Sr. Lee, el orador pensaba que algunas de sus alusiones no podrían satisfacer a las Naciones Unidas ni al Comité Especial.

115. El representante de la India concluyó invitando a todos los miembros del Comité a votar por el proyecto de resolución.

116. En su 463a. sesión, el 7 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó el proyecto de resolución (A/AC.109/L.320) por 20 votos contra 3 y 1 abstención.

117. La representante de los Estados Unidos de América lamentó, al explicar su voto, que su delegación no hubiera podido pronunciarse a favor del pro-

yecto de resolución, aun cuando aprobaba la mayor parte de sus objetivos. El objetivo de la armonía de las comunidades y de la unidad nacional de las Islas Viti contaba con el apoyo de todos los miembros del Comité, pero le parecía a la oradora que la resolución contenía conclusiones y recomendaciones que hacían caso omiso de la realidad de la situación y de los actuales esfuerzos para hacerle frente. Estimaba de todo punto inexacto que la Potencia Administradora no hubiese tenido en cuenta los objetivos definidos en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre las Islas Viti. La Conferencia Constituyente de 1965 se había impuesto como misión esencial el logro de esos objetivos, y las reformas realizadas, que debían conducir a la elección de un nuevo órgano legislativo en el próximo otoño, tendían al mismo objetivo. Añadió que el Consejo Legislativo se compondría de miembros elegidos por las tres comunidades. De esa forma, podrían aparecer dirigentes que representarían a toda la población y no a una sola comunidad. Se estaban adoptando medidas importantes para eliminar las divisiones en las Islas Viti. No había que hacer caso omiso de esas medidas ni de sus perspectivas.

118. Por estimar que las medidas preconizadas en el proyecto, sobre todo la designación de una misión visitadora, no permitirían superar las dificultades del Territorio, la delegación de los Estados Unidos votó contra ese proyecto.

119. El representante de Italia dijo que su delegación aprobaba los principios generales y las ideas expuestas en la resolución que se acababa de aprobar, pero tenía una serie de reservas que la habían inducido a abstenerse. En primer lugar, las críticas sobre la actitud de la Potencia Administradora y, en particular, la declaración de que ésta no cumplía las resoluciones de la Asamblea General, no parecían corresponder a la realidad. Quizás el Reino Unido no había hecho todo lo que el Comité hubiera deseado, pero no se podía pretender que se oponía enteramente a los propósitos y objetivos del Comité Especial. En segundo lugar, era importante acompañar la evolución del Territorio hacia la independencia de medidas para mantener la paz y la unidad racial. En el proyecto de resolución, y en particular en el párrafo 3 de su parte dispositiva, no se tenía suficientemente en cuenta ese aspecto del problema. Por último, debería haberse precisado que el envío de una misión visitadora se decidiría en consulta con la Potencia Administradora.

120. El texto de la resolución sobre las Islas Viti (A/AC.109/201), aprobada por el Comité Especial en su 463a. sesión el 7 de septiembre de 1966, dice lo siguiente:

“El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

“Habiendo examinado la cuestión de las Islas Viti.

“Habiendo escuchado las declaraciones de la Potencia Administradora,

“Recordando las resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 1951 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, 2068 (XX) de 16 de diciembre de 1965 y 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, aprobadas por la Asamblea General,

“Tomando nota con pesar de que la Potencia Administradora continúa haciendo caso omiso de las recomendaciones que figuran en las diversas resoluciones de la Asamblea General,

“1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Islas Viti a la libertad e independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

“2. Deplora profundamente el incumplimiento por la Potencia Administradora de las diversas resoluciones aprobadas por el Comité Especial y la Asamblea General en relación con las Islas Viti;

“3. Pide al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en su calidad de Potencia Administradora, que aplique inmediatamente las medidas siguientes:

“a) Celebración de elecciones generales a base de un voto por persona, de conformidad con el principio del sufragio universal de los adultos, a fin de formar una asamblea constituyente que se encargará de redactar una constitución democrática;

“b) Formación de un gobierno representativo, y traspaso a este gobierno de plenos poderes;

“c) Fijación de una fecha próxima para la concesión de la independencia al pueblo de las Islas Viti;

“d) Supresión de toda clase de medidas discriminatorias, para fomentar la armonía de la comunidad y la unidad nacional en el Territorio;

“4. Decide designar un subcomité para que visite las Islas Viti con el fin de estudiar directamente la situación en el Territorio e informar lo antes posible al Comité Especial;

“5. Pide al Presidente que proceda a la designación del Subcomité previsto en el párrafo 4 supra;

“6. Pide al Secretario General que facilite todos los medios necesarios para la visita del Subcomité al Territorio de las Islas Viti.”

121. En la 483a. sesión, el 30 de noviembre de 1966, el Presidente informó al Comité Especial de que designaría el Subcomité al principio del próximo período de sesiones del Comité.

CAPÍTULO IX*

GUINEA ECUATORIAL (FERNANDO POO Y RIO MUNI)

A. MEDIDAS ADOPTADAS ANTERIORMENTE POR EL COMITÉ ESPECIAL Y LA ASAMBLEA GENERAL

1. Después de haber examinado la cuestión de Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) en sus

sesiones celebradas en 1964, el Comité Especial aprobó una resolución que figura en el informe que presentó a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. IX, párr. 111). En las

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.7.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

sesiones que celebró en 1965, el Comité Especial no examinó concretamente ese Territorio, pero incluyó la información pertinente en su informe a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1², cap. X).

2. En su vigésimo período de sesiones, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó la resolución 2067 (XX). En el quinto párrafo del preámbulo de la resolución, la Asamblea General tomó nota de que los Territorios de Fernando Poo y Río Muni habían sido fusionados y denominados Guinea Ecuatorial.

3. En los párrafos de la parte dispositiva de esa resolución, la Asamblea General tomó las siguientes disposiciones:

"1. *Reafirma* el derecho imprescriptible del pueblo de Guinea Ecuatorial a la libre determinación y a la independencia;

"2. *Pide* a la Potencia Administradora que señale la fecha más próxima posible para la independencia después de celebrar un referéndum popular por sufragio universal bajo el control de las Naciones Unidas;

"3. *Invita* al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a mantenerse al corriente de la aplicación de la presente resolución y a informar al respecto a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones."

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO³

4. La política seguida por la Potencia Administradora, se declara en la información transmitida, ha sido la de completar las distintas fases del proceso de implantación del régimen de autonomía, de acuerdo con las leyes fundamentales por las que se instauró dicho régimen. Se llevaron a cabo elecciones y nombramientos de las personas que habían de desempeñar los altos cargos de gobierno. La composición inicial de los distintos órganos del Gobierno, se señala, no ha experimentado todavía variación alguna, por continuar dichos órganos funcionando dentro de los plazos señalados por la ley. El cuadro de dirigentes se completó durante el período al que se refiere la información transmitida con el nombramiento del delegado en Madrid del Gobierno Autónomo.

5. En el orden social se ha prestado preferente atención, se indica, al movimiento cooperativista, al que la Potencia Administradora ha contribuido mediante la aportación de créditos a largo plazo, y a la construcción de viviendas. La labor realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda está representada por la construcción de mil quinientas viviendas con un costo de 301 millones de pesetas⁴.

6. Para la Magistratura del Trabajo y otros organismos con competencia en asuntos laborales, se han se-

leccionado ocho funcionarios naturales del Territorio, que actualmente siguen sus estudios en Madrid.

7. Las actividades docentes durante este período se concentraron principalmente en la creación de nuevos centros. Así, en lo que se relaciona con la enseñanza media, se establecieron los institutos de enseñanza secundaria de Fernando Poo y Río Muni con residencia en Santa Isabel y Bata, respectivamente. En las mismas poblaciones fueron creadas escuelas de magisterio y de aprendizaje industrial. En enseñanza primaria, el esfuerzo se dirigió hacia el aumento de la plantilla del personal docente. Por lo que respecta a la labor de asistencia a la educación por medio de concesión de becas, se sigue una política de preferencia hacia los estudios superiores, que no pueden cursarse en la Guinea Ecuatorial, habiéndose concedido becas por un importe de 3.500.000 pesetas cada año para realizar estudios en Madrid, Barcelona y otros centros universitarios.

8. En obras públicas, se señala la construcción de carreteras, abastecimiento de agua, puertos, autopistas al aeropuerto de Santa Isabel, y otras cuyos presupuestos globales de los años 1964-1966 alcanzan la suma de 425 millones de pesetas.

9. En el orden sanitario siguen casi desaparecidas o bajo control endemias tales como la tripanosomiasis, la lepra y el paludismo; respecto a este último se halla en trámite un plan de erradicación total. Al frente de la organización sanitaria se encuentra un consejero de Gobierno, un director y doctores en medicina.

10. En cuanto a la capacitación de los naturales del Territorio para los servicios públicos, cabe consignar que el servicio de sanidad cuenta con varios doctores en medicina autóctonos, entre ellos, el jefe del servicio. Otros organismos tienen también cubierto con personal autóctono sus principales puestos. Tal ocurre con los inspectores de trabajo, con jefes del Cuerpo Especial de Policía y otros cargos profesionales relevantes. La proporción de personal autóctono, se indica, casi absorbe las plantillas de personal en los demás cargos que integran la administración pública.

Servicios de sanidad

11. En 1965 se han realizado en los diversos centros sanitarios 109.730 consultas médicas y han sido asistidos en los hospitales 35.342 enfermos. De ellos 10.743 fueron tratados en el hospital de Santa Isabel, 5.877 en el de Bata y 7.519 en el de San Carlos. Los equipos quirúrgicos han realizado en los hospitales una labor que alcanza a 2.966 intervenciones en el de Santa Isabel y 1.237 en el de Bata. En dicho año hubo un incremento de intervenciones debido a accidentes traumáticos. Los servicios de odontología, oftalmología e higiene infantil completan esta labor asistencial. En cuanto a asistencia en clínicas de maternidad, la cifra de nacimientos en la maternidad de Santa Isabel fue 2.660 y en la de Bata 906.

12. En el cuadro epidemiológico de la región destaca en primer lugar el paludismo con 30.000 casos registrados. Ello, se indica, no supone un incremento de la endemia, sino una mayor asistencia a los consultorios en relación con el intento de erradicación. La morbilidad por disentería mantiene la cifra de 7.159 casos. El control de tripanosomiasis descubre 97 casos, de los cuales casi la mitad corresponde a Puerto Iradier. Para estos casos han sido precisos 393.451 análisis hema-

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, *Anexos*, adición al tema 23 del programa.

³ La información que se presenta en esta sección ha sido tomada de la información que, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, ha transmitido España el 28 de junio de 1966.

⁴ La moneda local es la peseta española, que equivale a 0,0168 dólares de los Estados Unidos.

tológicos. Entre las afecciones de la infancia han destacado este año una epidemia de sarampión que alcanzó 3.403 casos, con una mortalidad de 1,2%. Otra de coqueluche de 2.317 casos, con una defunción. La parotiditis registró 512 casos.

13. En el orden de la medicina preventiva el servicio sanitario ha organizado y desarrollado una campaña de vacunación de poliomielitis que alcanzó 44.029 vacunaciones, otras de vacunación triple (tétano, difteria, coqueluche) que alcanzaron a un 86% de la población infantil. Se ha iniciado, también, el empleo de una vacunación antisarampión.

14. El viejo e insuficiente hospital de Concepción ha sido reemplazado por una nueva construcción capaz para 70 camas y dotado con los necesarios servicios complementarios que engloban, además del edificio hospitalario, una casa comunidad para las religiosas encargadas del cuidado de los enfermos, y un lote de viviendas para los enfermeros.

15. El hospital de Ebebiyín, a punto de terminar, permitirá muy pronto la incorporación de otra nueva construcción al programa de ampliación y renovación de la infraestructura sanitaria.

Servicios de enseñanza primaria

16. Este servicio cuenta con 30 escuelas primarias y 135 escuelas elementales. Sigue funcionando la Escuela Superior. La matrícula al final del pasado año en estas escuelas fue de 21.091 y se concedieron al final del curso 1.105 certificados de estudios primarios y 1.701 de estudios elementales. Durante el período de autonomía se crearon 10 escuelas elementales.

17. La plantilla de personal técnico y auxiliar con que cuenta este Servicio es la siguiente: un director-inspector; un subinspector en Bata; 18 maestros nacionales; 29 maestros de primera enseñanza; y 350 auxiliares-maestros.

18. La plantilla del personal técnico y auxiliar ha resultado incrementada por 35 maestros de primera enseñanza y 45 auxiliares-maestros. El actual director-inspector de este servicio es natural de la Guinea Ecuatorial y lo mismo los 29 maestros de primera enseñanza. Estos maestros de enseñanza primaria han sido formados en las escuelas normales de Santa Isabel y Bata, que para la formación del personal técnico de enseñanza se crearon en esta región. De la Escuela Superior salieron 20 auxiliares-maestros que actualmente realizan un curso de prácticas en los grupos escolares.

19. Sigue funcionando el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición distribuyéndose en las escuelas el complemento alimenticio de leche en polvo y siguen funcionando los comedores escolares.

20. En los meses de diciembre de 1964 y enero y febrero de 1965 funcionaron por primera vez en el Valle de Moka, las colonias escolares, con 4 turnos de 20 días cada uno, en los que los escolares de Fernando Poo disfrutaron del benigno clima del referido valle. Estas colonias se volvieron a repetir en los mismos meses del actual curso escolar 1965-1966. También está proyectado que durante la estación seca y en Río Muni funcionen colonias escolares para los alumnos de las escuelas de la región continental en una zona de altitud.

21. En esta primera etapa de autonomía se crearon en Río Muni 6 delegaciones de enseñanza en los dis-

tritos escolares de Sevilla de Niefang, Valladolid de los Bimbiles, Mongomo de Guadalupe, Nsoro, Acurenam y Puerto Iradier, estando al frente de cada una de ellas un maestro de primera enseñanza, natural del Territorio, que se encarga de coordinar la labor técnica y administrativa de las escuelas de la demarcación con la dirección-inspección del servicio.

22. En el año actual se ha elaborado por el personal técnico del servicio la Ley de Enseñanza Primaria adaptada a las necesidades pedagógicas de esta región.

Servicios de obras públicas

23. Desde el mes de julio de 1964, en que este servicio del Gobierno General pasó a depender de la Administración Autónoma de Guinea Ecuatorial, y de una manera directa de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, se ha dado fin a las empresas de obras públicas iniciadas por el régimen anterior, como la construcción del abastecimiento de aguas a Santa Isabel, la autopista al nuevo aeropuerto y la construcción del faro aeromarítimo de Punta Santiago, y se han iniciado otras obras de carreteras y abastecimientos de aguas.

24. Entre las obras en ejecución se cuenta la carretera de circunvalación a la Isla por el este. El valor económico de esta nueva vía es importante, teniendo en cuenta que atraviesa la zona cacaotera más rica de Fernando Poo, donde existe gran cantidad de fincas de propietarios modestos, y en la que el transporte de los productos había que hacerlo en condiciones antieconómicas.

25. En Río Muni se ha trabajado para acondicionar los firmes de las carreteras, cuyas peculiaridades las hacen vulnerables, más que al tráfico propiamente dicho, a la acción de las lluvias tropicales. Hoy día se mantiene la red de carreteras abierta al tráfico en su totalidad.

26. Desde la entrada en vigor del régimen autónomo, las actividades del Servicio de Vivienda y Urbanismo han aumentado, pasando el presupuesto de "Obras Nuevas" de 20.000.000 de pesetas anuales a 102.826.858,60 pesetas. Las principales misiones del Servicio de Vivienda y Urbanismo son: a) proyecto y dirección de obras nuevas; b) conservación de edificios oficiales; c) gestión de expedientes de adjudicación de solares y caducidad de los mismos; d) administración de viviendas oficiales.

27. Las cantidades presupuestadas se destinan principalmente a edificios de enseñanza, sanitarios, viviendas y oficinas.

28. En construcciones escolares cabe señalar la construcción en Bata de una Escuela Normal del Magisterio para 640 alumnos y un Instituto Nacional de Enseñanza Secundaria para 1.200 alumnos. En Mongomo y Basacato del Oeste se van a construir escuelas de enseñanza primaria y secundaria con residencias. La cantidad total invertida para construcciones escolares ha sido de 30.193.449,56 pesetas.

29. En construcciones de viviendas para funcionarios, la cantidad total invertida fue de 27.344.820,75 pesetas.

30. Para el servicio de sanidad las inversiones han sido de 14.946.385,35 pesetas. Las obras incluyen la terminación del hospital de Concepción y del hospital de Evinayong.

31. El 1,9% del presupuesto (2.002.586,29 pesetas) se ha destinado a habilitar oficinas para la Administración Autónoma, en especial la nueva Dirección de Sanidad que provisionalmente alberga al Consejo de Gobierno.

32. Al Consejo de Gobierno, para su instalación definitiva, incluidas las residencias de los Consejeros se han adscrito 28.012.688 pesetas.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

33. El Comité Especial examinó la cuestión de Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) en sus sesiones 447a., 451a., 452a. y 454a., celebradas en Africa entre el 15 y el 21 de junio de 1966.

34. En una carta de fecha 16 de junio de 1966 (A/AC.109/185), el Representante Permanente Adjunto de España en las Naciones Unidas solicitó autorización para que una delegación española fuera representada como observadora en las sesiones del Comité Especial en Argel y tomara parte en las deliberaciones sobre Guinea Ecuatorial. En su 451a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, acceder a esta solicitud.

Petición escrita y audiencia

35. El Comité Especial distribuyó la siguiente petición referente a la Guinea Ecuatorial:

Peticionario

Documento No.

Sr. Daniel G. Mbandemezo'o, representante en la República Árabe Unida de Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE), referente a Guinea Ecuatorial A/AC.109/PET.500

36. En su 447a. sesión, celebrada en El Cairo el 15 de junio de 1966, el Comité Especial escuchó al Sr. Mbandemezo'o (IPGE).

37. El Sr. Mbandemezo'o dijo que los colonialistas españoles y sus amigos imperialistas hacían circular una serie de mitos sobre Guinea Ecuatorial. Añadió que creía que su deber era restablecer ciertas verdades. Desde hacía ya 188 años, Guinea Ecuatorial era una colonia española. Geográficamente estaba dividida en dos territorios desiguales: Fernando Poo y Río Muni. Fernando Poo tenía unos 2.000 kilómetros cuadrados y 55.000 habitantes, de los que 4.300 eran europeos. Su capital era el puerto de Santa Isabel, del que dependía también la pequeña isla de Annobón, con una superficie de 17 kilómetros cuadrados. Río Muni tenía unos 26.000 kilómetros cuadrados y 300.000 habitantes, entre ellos 3.000 colonos españoles. Limitaba al oeste por el océano Atlántico, al norte por la República Federal del Camerún, al este y al sur por la República de Gabón. Su capital era el puerto de Bata. De este territorio dependían las pequeñas Islas de Corisco y las Elobeyes. Las riquezas de Guinea Ecuatorial eran las maderas, el cacao, el café, el aceite de palma, los palmitos, las bananas y la nuez de coco. El país también tenía oro, petróleo, carbón, hulla blanca, hierro, manganeso, uranio y bauxita.

38. Manifestó que en 1959 los habitantes de Río Muni y de Fernando Poo habían adoptado la decisión de emprender la lucha contra el colonialismo español. Los dos movimientos clandestinos de liberación, la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE) y el

Mouvement National de Liberation de la Guinée Equatoriale (MNLGE), habían sido severamente reprimidos por el Gobierno español. Se había internado a un gran número de militantes y la isla de Annobón había sido transformada en campo de concentración. En enero de 1964 el Gobierno español decidió conceder a los habitantes del país una supuesta "autonomía interna" que de hecho no cambió nada la antigua condición colonial de la Guinea Ecuatorial. Del mismo modo, el referéndum sobre la llamada ley "fundamental" había servido de pretexto para un gran número de violencias, pues las fuerzas colonialistas querían impedir que los militantes nacionalistas se dirigieran al pueblo. En vista de que el pueblo de Guinea había votado de todos modos unánimemente contra esa ley, el Gobierno español se propuso falsear los resultados. Los nacionalistas guineos pidieron entonces la anulación del referéndum; el Gobierno español respondió mediante la creación arbitraria de un supuesto "gobierno autónomo", naturalmente a las órdenes de las autoridades españolas. Se fundó un partido análogo a la Falange Española, el Movimiento de Unión Nacional de la Guinea Ecuatorial (MUNGE) al servicio por supuesto de los colonos occidentales y de la pequeña burguesía. En 1964 dicho partido fue declarado partido único del país y dio orden de encarcelar a los nacionalistas del IPGE, sosteniendo que los miembros de este partido celebraban reuniones clandestinas.

39. Indicó que durante este período, los asesinatos, las condenas al exilio, las expulsiones, los secuestros arbitrarios y las torturas de toda índole habían sido la suerte cotidiana de los nacionalistas guineos. La IPGE y el MNLGE decidieron entonces unirse para luchar mejor contra los sanguinarios colonialistas. Esta decisión fue adoptada en octubre de 1964; el nuevo frente debía llamarse Frente Nacional y Popular de Liberación de la Guinea Ecuatorial (FRENAPO). Sin embargo, en marzo de 1965 el Gobierno español decidió reconocer al MNLGE, con lo que dio prueba de confabulación entre este partido y la Potencia Administradora. La IPGE, en cambio, a pesar de disfrutar de una gran mayoría, fue prohibido y sus miembros perseguidos con encarnizamiento. El partido seguía proscrito y, naturalmente, se había retirado del FRENAPO, convencido de que sus dirigentes eran instrumentos de la política imperialista española.

40. Declaró que el Gobierno español abrigaba en la actualidad terribles proyectos contra el pueblo guineo; 12.000 militares ocupaban el país, y cuatro barcos de guerra patrullaban frente a Río Muni y Fernando Poo. Las tropas españolas disponían asimismo de aviones de reacción y de comandos de paracaidistas.

41. Lo más irritante era que el Gobierno español no sólo recibía la ayuda de sus aliados de la OTAN, sino también la ayuda moral de ciertos países africanos que permitían así al Gobierno español prolongar esta odiosa situación. Los refugiados políticos de Guinea Ecuatorial no podían continuar su lucha política contra el colonialismo español y el supuesto gobierno autónomo de Guinea Ecuatorial en ciertos países limítrofes de Africa. Así, después del golpe militar que había derrocado al Dr. Nkrumah, los movimientos de liberación de Africa habían sido expulsados de Ghana por el nuevo régimen. Actualmente había detenidos en las cárceles de Accra diez militantes de la IPGE; las autoridades de Ghana habían anunciado recientemente que estos diez revolucionarios serían entregados a España.

42. Otra maniobra española había consistido en tratar de persuadir al resto del mundo de que la IPGE era un movimiento comunista que predicaba la violencia. La IPGE no era un partido comunista ni amaba la violencia pero, si fuese necesario, usaría de la violencia para defender los derechos, las libertades y la dignidad del pueblo de Guinea Ecuatorial. La IPGE pedía encarecidamente al Comité Especial que incluyera en su programa la cuestión de Guinea Ecuatorial, que condenara el colonialismo español en ese país, que insistiera ante el Gobierno español para que éste concediera una independencia incondicional al Territorio, que interviniera ante las autoridades de Ghana para que pusieran en libertad a los diez militantes de la IPGE encarcelados en Accra, que usara su influencia para convencer a los gobiernos africanos, miembros de la Organización de Unidad Africana — y en particular a los del Camerún, Gabón y Nigeria —, que concedieran a la IPGE la máxima libertad de acción en sus respectivos países, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en Accra, y finalmente que hiciera un llamamiento a los Estados independientes de Africa y a todos los países amantes de la paz para que concedieran a la IPGE el apoyo político, moral y material necesario para la liquidación total y definitiva del colonialismo español.

Declaraciones generales

43. El representante de España dijo que sería una reiteración innecesaria volver a explicar la situación de la Guinea Ecuatorial, su proceso evolutivo en el orden político y su avance constitucional. Los representantes conocían la existencia de su gobierno autónomo. El representante de España anunció que participaban en su delegación el Sr. Ondó Edú, Presidente del Consejo de Gobierno, y el Sr. Gori Molubela, Presidente de la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial. El Sr. Ondó Edú era figura conocida en las Naciones Unidas; exiliado en el extranjero, había acudido como peticionario a las Naciones Unidas hacía más de cuatro años. Reintegrado a su patria cuando el Gobierno español anunció el referéndum sobre la cuestión de la autonomía, había hecho su campaña electoral con entera libertad; como conocía bien a su pueblo y podía expresarse bien en su idioma nativo, el fang, los había cautivado pronto y su pueblo no había dudado en elegirlo. El señor Gori Molubela era persona de conocimientos profundos de las realidades de su país. Añadió que, a continuación, el Sr. Ondó Edú haría una declaración y el señor Gori Molubela respondería en unión de aquél para aclarar cuantos extremos desearan conocer los representantes sobre el tema sometido a su consideración.

44. Nada tenía España que ocultar en la Guinea Ecuatorial, y en prueba de ello y para que el Comité se percatara de la situación verdadera de este Territorio, el Gobierno español vería con especial agrado que el Comité o una representación del mismo se trasladase a dicho Territorio para comprobar su situación real. Si por no tenerlo previsto no pudiera aceptar el Comité esa invitación por el momento, cabía confiar en que pudiera realizar esta visita en una fecha próxima. Los representantes decidirían sobre la invitación, que quedaba en pie. El orador no dudaba que los representantes se percatarían de la importancia y trascendencia de este ofrecimiento.

45. El Sr. Ondó Edú, haciendo uso de la palabra en calidad de representante de España, recordó a los representantes que en el mes de noviembre de 1965 había asistido en Nueva York a las sesiones de la Cuarta Comisión, en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, oportunidad en que hiciera una declaración en calidad de Presidente del Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial.

46. Asimismo recordó que años atrás había asistido también a las deliberaciones de la Cuarta Comisión, pero en una condición completamente distinta: a la sazón era un peticionario residente fuera de su país, que consideraba necesario, en unión de otros compatriotas, los Sres. Atanasio N'Dong, Jesús Oyono e Itanguino, señalar aquel procedimiento, no sólo del Gobierno español, sino de las Naciones Unidas. Todo esto era ya historia pasada. El Gobierno español había acabado aceptando la petición de que se concediera la autonomía a la Guinea Ecuatorial. Concedida ésta, al concurrir el orador a la última Asamblea General en Nueva York, dio amplia información sobre el procedimiento electoral seguido y la constitución del Gobierno; todo ello constaba en las actas de la Cuarta Comisión y la intervención del orador en la 1550a. sesión de esa Comisión había sido reproducida como documento⁵.

47. Habiendo aprobado la Asamblea General la resolución 2067 (XX), el orador había querido, por conducto del Comité, darle las más expresivas gracias del Gobierno de Guinea Ecuatorial, que presidía, y de su pueblo. Del contenido de esta resolución había sido informado por las autoridades españolas. Le parecía especialmente importante el hecho de que las Naciones Unidas hubiesen reafirmado el derecho del pueblo de la Guinea Ecuatorial a la libre determinación y a la independencia. Sin embargo, no sería justo si, por su parte, según había dicho ante la Cuarta Comisión el 9 de noviembre de 1965 — o sea que “entre las cosas que he podido aprender de quienes nos educaron y aún lo siguen haciendo, hay una que es una divisa muy sencilla: nobleza obliga” —, dejara de señalar que un miembro del Gobierno de España le había informado, en su calidad de Presidente del Consejo de Gobierno, que era deseo expreso y formal del Gobierno español que la Guinea Ecuatorial escogiera cuando quisiera su propio camino político, valía decir la independencia total, si creía que ésa era la mejor solución de sus problemas.

48. De ello podía deducirse fácilmente que aceptando el principio de libre determinación no existía ningún impedimento para que, si así lo deseaba, la Guinea Ecuatorial solicitara la independencia. Y puesto que de ello se trataba, el orador quería informar al Comité que ésa era una aspiración que hallaba evidente eco en el corazón de su pueblo, pero seguía creyendo, como había dicho en el mes de noviembre de 1965, que era necesario y conveniente pasar por una etapa de preparación, y al respecto pedía precisamente a los representantes su ayuda, su apoyo y su asistencia. La Guinea Ecuatorial necesitaba ayuda técnica y ayuda económica; necesitaba que la banca internacional la ayudara a promover el adelanto de su pueblo. Era muy fácil alentar la independencia pero muy difícil sobrevivir una vez lograda ésta. No podía admitirse que un sentimiento tan noble fuese objeto de demagogia.

49. Añadió que los elegidos por el pueblo de Guinea tenían responsabilidades que los obligaban y que no podían eludir.

⁵ A/C.4/656.

50. Estas responsabilidades giraban fundamentalmente en torno al deseo de consolidar en la Guinea Ecuatorial la independencia y el futuro desarrollo, basados en realidades sociales y económicas que fuesen firmes y seguras; pero el orador no quería que una vez lograda esa independencia, su patria fuese objeto de la penetración económica de cualquier Potencia extranjera, verdadera forma de neocolonialismo tan mala como la penetración política, y más difícil de controlar.

51. El orador repitió una vez más que deseaba la independencia, incluso para el día de mañana. Mas ahora la Guinea Ecuatorial necesitaba seguir preparándose para poder, una vez independiente, sobrevivir y no caer en situaciones que frustraran su independencia. Esto era lo que deseaba de España, y lo que deseaba que la Asamblea General considerara en su vigésimo primer período de sesiones.

52. El orador declaró que era cierto que Guinea tenía problemas, pero incumbía a quienes habían sido elegidos libremente por el pueblo de Guinea el resolverlos. Algún hermano que aún vivía en el extranjero se había dirigido en ocasiones al Comité. En la Guinea existía ya un régimen de autonomía con libertad de acción, y nada impedía a ningún guineo regresar para trabajar por el porvenir de su patria. Por su parte, el orador sólo deseaba que así fuera.

53. Añadió que con esto no trataba, ni mucho menos, de ocultar nada a las Naciones Unidas ni al Comité, al que se le había encomendado la tarea de llevar a cabo la descolonización. Por ello su Gobierno veía con especial satisfacción la invitación hecha por el representante de España al Comité para que se trasladase a la Guinea Ecuatorial, donde podría comprobar la situación real y sugerir las mejores soluciones que creyera convenientes, y que serían estudiadas con todo interés.

54. Subrayó que si los miembros del Comité desearan alguna aclaración, también estaba a su entera disposición el Presidente de la Asamblea, cámara representativa designada por el pueblo en unas elecciones cuya sinceridad se reconocía en las Naciones Unidas.

D. DECISIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ESPECIAL

55. En la 452a. sesión, el representante de Siria presentó el proyecto de resolución A/AC.109/L.314, patrocinado por Afganistán, la Costa de Marfil, Etiopía, la India, el Irak, el Irán, Madagascar, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia, y dijo que la cuestión de la Guinea Ecuatorial caía dentro del alcance de las resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, y 2067 (XX) de 16 de diciembre de 1965. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales contenida en la primera de esas resoluciones no era un progreso más en la historia de las Naciones Unidas, sino el comienzo de una nueva época en las relaciones humanas internacionales. En virtud de esa resolución, el pueblo de la Guinea Ecuatorial había logrado que se reconociera su legítimo derecho a la libre determinación y a la independencia y que se aceptara su derecho irrevocable a vivir en libertad y gozar de la plena soberanía sobre su territorio y sus recursos. En virtud de dicha resolución se había pedido a la Potencia Administradora que estableciese la fecha más próxima posible para la independencia, a base del sufragio universal y bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

56. El fondo del problema era acelerar los preparativos para la independencia del Territorio de modo que no se demorara su proclamación efectiva. Debía ponerse el máximo empeño en superar los problemas que se planteaban a este respecto, y parecía que la Potencia Administradora había tenido en cuenta ese propósito al tomar la iniciativa de invitar al Comité Especial a que enviase representantes que visitasen el Territorio y se familiarizaran con los preparativos que se hacían.

57. Teniendo presentes estas consideraciones, el grupo afroasiático y Yugoslavia habían presentado el proyecto de resolución que ocupaba al Comité, que el orador presentó, por párrafos, al mismo. Los patrocinadores esperaban que todos los miembros del Comité le dieran su apoyo.

58. El representante de Sierra Leona dijo que celebraba el ofrecimiento de España de que el Comité Especial visitara la Guinea Ecuatorial y examinara su situación. También le complacía que la invitación hubiese sido formulada por la propia Potencia Administradora, como era procedente. Esa actitud le pareció alentadora.

59. Añadió que en la resolución 2067 (XX) de la Asamblea General se había pedido concretamente a la Potencia Administradora que señalara la fecha más próxima posible para la independencia después de celebrar elecciones mediante el sufragio universal bajo el control de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Potencia Administradora no había accedido a ello hasta la fecha. Se había dicho al Comité que el Territorio no estaba preparado para la independencia, pero en el párrafo 3 del proyecto de resolución (A/AC.109/L.314) se daba a la Potencia Administradora un poco más de tiempo para atender la petición de la Asamblea General. Sería conveniente que cuando el propuesto subcomité estuviese listo para visitar el Territorio, la Potencia Administradora pudiera dar una indicación acerca de la fecha en que se podría esperar la independencia. La Asamblea General había invitado al Comité a mantenerse al corriente de la aplicación de la resolución 2067 (XX) y a informar al respecto lo antes posible.

60. Dijo que para su delegación era un honor poder apoyar el proyecto de resolución (A/AC.109/L.314) y que él, por su parte, esperaba que el Comité lo aprobase por unanimidad, pues las propuestas que contenía representaban una extensión de la resolución 2067 (XX), la cual, a su vez, había sido aprobada por 103 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

61. El representante de Chile manifestó su satisfacción por la declaración del representante de España. La delegación de Chile no podía menos de encomiar la labor realizada por el Gobierno de España para fomentar el proceso de descolonización en los territorios que aún estaban bajo su administración. En muchos otros casos las Potencias administradoras se habían erigido en obstáculo a la labor del Comité y habían bloqueado el camino hacia la independencia. La actitud de cooperación manifestada por España se debía a que comprendía que el colonialismo no podía persistir en el siglo XX y de que, por lo tanto, todos los territorios aún sometidos a ese régimen tenían que evolucionar rápidamente hacia la independencia. En la Guinea Ecuatorial, una vez preparado el camino por la Potencia Administradora, se había hecho cargo del poder un gobierno autónomo. Estas circunstancias tan favorables parecían insólitas cuando se comparaban con la política de no cooperación

adoptada por otros gobiernos. España acababa de invitar al Comité Especial a que enviase una misión visitadora a la Guinea Ecuatorial, acto ejemplar y sin precedentes que deberían imitar otras Potencias administradoras. El Comité debería aceptar la invitación y aprovechar la ocasión para formular y aprobar planes concretos de acción.

62. Dado que en el proyecto de resolución preparado por el grupo de países de Asia y Africa y Yugoslavia sobre la Guinea Ecuatorial (A/AC.109/L.314) se aceptaba la invitación de España y se decidía enviar un subcomité a Guinea Ecuatorial tan pronto fuese posible, el orador esperaba que se adoptaran cuanto antes las medidas necesarias para llevar a la práctica dicha decisión.

63. Refiriéndose al párrafo 2 de la parte dispositiva, pidió al Comité que tuviera presente la declaración del Sr. Ondó Edú, que había contado con la aprobación general. Añadió que Chile apoyaba resueltamente el proyecto de resolución.

64. El representante de la República Unida de Tanzania elogió la actitud de la Potencia Administradora y añadió que está convencido de que si otras siguieran su ejemplo se facilitaría mucho la labor del Comité Especial.

65. Aunque celebraba los progresos realizados en la Guinea Ecuatorial, se sentía defraudado por el hecho de que todavía no se hubiera preparado a la población para la independencia total. A su juicio se había aplazado demasiado tiempo la libre determinación, pero deseaba asegurar al pueblo de la Guinea Ecuatorial que la independencia no señalaría el fin de la cooperación que mantenía con el pueblo de Tanzania, sino más bien un nuevo comienzo. Por lo tanto, interesaba a todos que, conforme a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, amaneciera lo antes posible el día de la libertad.

66. Aunque el orador apreciaba la invitación sin precedentes hecha al Comité Especial por la Potencia Administradora, consideraba esencial que se adoptaran ciertas medidas preliminares para determinar si España estaba dispuesta a cooperar hasta el final. En primer lugar, el Comité debería pedir a España que repatriara a todos los desterrados o refugiados políticos que desearan regresar a la Guinea Ecuatorial. La presencia de esas personas sería muy útil no sólo para el Comité durante su misión, sino también para la joven nación durante todo el tiempo necesario para la preparación de la independencia. En segundo lugar, no se debería permitir que ningún obstáculo impidiese a los peticionarios o a los presos políticos declarar ante el Comité durante la estancia de éste en la Guinea Ecuatorial. Por último, la Potencia Administradora debería hacer todo lo posible para promover la aplicación más completa de las recomendaciones del Comité. Si España aceptaba esas condiciones, facilitaría la labor futura y crearía vínculos nuevos y fuertes entre la Potencia Administradora y el Comité Especial. Este, por su parte, se comprometería a adoptar todas las medidas posibles para que la descolonización se efectuara en forma constructiva y pacífica. El orador reiteró su agradecimiento al Gobierno de España por su cooperación y expresó la esperanza de que, una vez aprobadas las recomendaciones del Comité, España aplicara todas las medidas que se adoptasen.

67. El representante de Etiopía, aunque no consideraba necesario reiterar su apoyo al proyecto de re-

solución (A/AC.109/L.314) puesto que su delegación figuraba entre los autores, quería manifestar que había escuchado con gran interés la declaración del Embajador de España. Acogía satisfecho la invitación de España a fin de que un subcomité pudiese determinar directamente la verdadera situación de la Guinea Ecuatorial. España había actuado con suma inteligencia al adoptar esa medida y cabía alentarla a enfocar con un criterio análogo todos los medios de cooperación que llevarían al objetivo final, o sea la independencia de esos territorios. Por ese motivo, la delegación de Etiopía se sentía especialmente satisfecha al observar que el Comité Especial aceptaba sin reservas la invitación de España, y esperaba que dicha invitación se apreciara en lo que valía, sin suspicacias sobre los posibles motivos que hubiesen impulsado a España a hacerla. Lo importante era lograr que la Potencia Administradora diera todas las facilidades necesarias, con objeto de que la labor del Subcomité tuviera resultados óptimos.

68. El orador expresó la esperanza de que las demás Potencias administradoras, y en especial la vecina de España, Portugal, hicieran invitaciones análogas. La situación creada por la negativa de Portugal a cooperar con el Comité Especial, con el Secretario General o con la Asamblea General, habían tenido consecuencias deplorables que suponían graves obstáculos para la labor del Comité. En vista de que los habitantes de los territorios portugueses manifestaban su oposición con las armas, la Potencia Administradora debería admitir ya la necesidad de adoptar las medidas obvias e inevitables para concederles la independencia.

69. El representante de los Estados Unidos de América elogió las declaraciones de los miembros de la delegación de España y dijo que celebraba que el pueblo de la Guinea Ecuatorial tuviera la oportunidad de decidir su propio porvenir con una amplia gama de posibilidades, no limitada por unos acuerdos predeterminantes impuestos desde el exterior. Añadió que su delegación acogía complacida el proyecto de resolución (A/AC.109/L.314) y lo apoyaba sin reservas.

70. El representante de Australia anunció que su delegación apoyaba el proyecto de resolución (A/AC.109/L.314). Tenía que señalar que el documento adolecía de ciertas deficiencias, pero sólo impulsado por consideraciones objetivas, no por la vigorosa oposición que en ciertas cuestiones había manifestado en el pasado al Gobierno español. En primer lugar, el proyecto de resolución no elogiaba a España por el nuevo criterio ilustrado de que daba muestras ni por las reformas que acababa de introducir con miras a dar al pueblo una mayor participación en los asuntos del país. Debería reconocerse que en el pasado la Potencia Administradora se había negado — y hasta cierto punto seguía negándose — a reconocer la contribución de personas como el Sr. Ondó Edú que habían protestado contra su antigua política. El párrafo 3 de la parte dispositiva implicaba un juicio previo sobre la situación, que debería ser evaluada sobre el terreno por observadores capaces de descubrir lo que el pueblo deseaba realmente. Añadió que, como sólo deseaba indicar esos defectos, se unía a los oradores que ya habían hecho uso de la palabra en apoyo del proyecto de resolución.

71. El representante de Venezuela declaró que había visto muy complacido el proyecto de resolución (A/AC.109/L.314) sobre la Guinea Ecuatorial. La víspera, el Sr. Bonifacio Ondó Edú, Presidente del Gobierno de la Guinea Ecuatorial, había expuesto al Comité la

situación del Territorio. España se presentaba una vez más ante el Comité Especial afirmando su intención de aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y todas las demás resoluciones encaminadas al mismo objetivo, con lo cual daba un paso más en la dirección que seguía el Comité. España esperaba que el Comité Especial crease el subcomité mencionado en el proyecto de resolución e incluso invitaba a los miembros del Comité a ir a los territorios para informarse sobre el terreno de la situación que reinaba allí. Dicha actitud respondía a la tradición española y honraba a España. Aunque el orador deploraba que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no se mencionara el hecho de que el Comité había escuchado las observaciones que el Presidente Bonifacio Ondó Edú, en calidad de peticionario, había hecho sobre la situación en la Guinea Ecuatorial, dijo que votaría a favor del texto presentado al Comité, y que tenía el profundo deseo de que éste decidiera crear cuanto antes un subcomité que fuese a la Guinea Ecuatorial para ver cómo aplicaba España la resolución 1514 (XV) y las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

72. El representante del Irán celebró la invitación hecha por España, prueba de que ésta no tenía nada que ocultar al Comité. La delegación del Irán esperaba que otras Potencias administradoras siguieran el ejemplo de España y que la mayor cooperación entre ésta y el Comité Especial contribuyera eficazmente a fomentar las condiciones necesarias para la libre determinación del pueblo. El subcomité visitante debería estudiar a fondo cualquier solicitud de ayuda de los organismos especializados de las Naciones Unidas.

73. El representante del Irak se sumó a los partidarios del proyecto de resolución relativo a la Guinea Ecuatorial (A/AC.109/L.314), y dijo que las demás Potencias administradoras que se habían negado a recibir la visita de misiones del Comité Especial, pese a las muchas solicitudes que constaban en resoluciones y recomendaciones, deberían seguir el ejemplo de España. Indudablemente, la gran estimación de que gozaba España en el mundo árabe y en África se vería realizada por la nueva medida que acababa de adoptar.

74. El representante del Afganistán declaró que la opinión de su delegación estaba reflejada en el proyecto de resolución (A/AC.109/L.314), entre cuyos autores se contaba. La importancia del proyecto de resolución residía en el hecho de que señalaba una tendencia a desviarse de la táctica tradicional, opuesta a la cooperación de las Potencias administradoras. El orador esperaba que la visita propuesta acelerase la aplicación de las resoluciones 2067 (XX) y 1514 (XV) de la Asamblea General en cuanto a la independencia de la Guinea Ecuatorial.

75. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que no compartía el entusiasmo de ciertos representantes según los cuales España hacía, al parecer, un gran favor al Comité Especial al invitar a algunos de sus miembros a que fueran a la Guinea Ecuatorial. Todavía no se habían aplicado las resoluciones 2105 (XX) y 2067 (XX) de la Asamblea General, relativas a la fecha en que los territorios bajo el dominio colonial deberían recuperar su independencia. Lo mismo valía decir de la resolución sobre Ifni y sobre el Sáhara llamado español. En realidad, España, con la complicidad de otros países, intentaba frenar con ciertas maniobras la aplicación de las resoluciones de la Asam-

blea General que la obligarían a abandonar el continente africano.

76. Añadió que suscribía lo dicho por el representante de Tanzania. Era preciso que todos los peticionarios que deseaban hablar ante el Comité pudieran hacerlo; era preciso poner en libertad a los presos políticos y permitir que regresaran los desterrados. Unos y otros deberían poder manifestar su pensamiento ante el subcomité y ante el pueblo, y ejercer actividades políticas.

77. A continuación puso de relieve la importancia del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución (A/AC.109/L.314) y recordó que Australia había lamentado el limitado alcance de las atribuciones del subcomité, que, en realidad, debería hacer lo posible para que se llevaran a la práctica las resoluciones de la Asamblea General. En todo caso, si se quería que el subcomité pudiera hacer una labor positiva, debería evitarse que los representantes de los países que actuaban en connivencia con los colonialistas participaran en sus trabajos.

78. En su sesión 454a., celebrada el 21 de junio de 1966, el Comité Especial aprobó el proyecto de resolución A/AC.109/L.314, en votación nominal, por 22 votos contra ninguno, divididos como sigue:

A favor: Afganistán, Australia, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, India, Irak, Irán, Italia, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

En contra: Ninguno.

79. El texto de la resolución (A/AC.109/L.314) sobre la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) aprobado por el Comité Especial en su 454a. sesión, celebrada el 21 de junio de 1966, está concebido en la forma siguiente:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo examinado la cuestión de la Guinea Ecuatorial,

"Habiendo oído las declaraciones de la Potencia Administradora y de un peticionario,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960,

"Recordando además la resolución 2067 (XX) de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1965,

"1. Toma nota con satisfacción de la abierta invitación que le ha hecho la Potencia Administradora para que visite la Guinea Ecuatorial;

"2. Reafirma el derecho imprescriptible del pueblo de la Guinea Ecuatorial a la libre determinación y la independencia;

"3. Decide enviar a la Guinea Ecuatorial, tan pronto como sea posible, un subcomité encargado de averiguar cuál es la situación en el Territorio, con miras a acelerar el cumplimiento de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX) de la Asamblea General;

"4. Decide mantener en su programa la cuestión de la Guinea Ecuatorial."

80. A continuación de la votación, el representante de España declaró que el Gobierno de España apreciaba que el Comité Especial hubiera aceptado su invitación, y tomó nota con gratitud especial de las declaraciones de los representantes de Chile, Etiopía, Tanzania, los Estados Unidos de América, Australia, el Irán, el Irak, Afganistán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque este último no había estado completamente de acuerdo con el texto de la resolución, había puesto de relieve la solidaridad de su pueblo con el de España.

81. Añadió que había tomado nota en particular de la exhortación del representante de Tanzania para que se repatriaran los desterrados de la Guinea Ecuatorial, exhortación que reiteraba las palabras del Sr. Ondó Edú, quien había instado dos días antes al Comité a que se asegurase a los peticionarios y detenidos políticos la posibilidad de comparecer ante el subcomité durante su misión. Sin embargo, el representante de España recordó al Comité que no había detenidos políticos. El Comité no tenía la culpa de que sus miembros no conocieran este hecho, pero ello podía remediarse con un conocimiento directo de la situación.

82. En cuanto a la difusión de información, señaló que se había respetado la fecha límite del 15 de junio de 1966 y que la Potencia Administradora, de conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta, estaba preparando un informe sobre los territorios administrados por España.

83. Quería, antes de formular sus observaciones sobre la resolución, expresar su satisfacción porque el Comité Especial hubiese aceptado la invitación abierta de la Potencia Administradora para visitar la Guinea Ecuatorial.

84. En el preámbulo de la resolución se mencionaba la presencia de un peticionario y la delegación de España tenía que señalar que al enterarse de que la cuestión de la Guinea Ecuatorial se había incluido en el programa de las reuniones de Argelia, había hecho sus planes para asistir a los debates. No había sabido, en El Cairo, que había de aparecer un peticionario ante el Comité. Aunque no concedía mayor importancia a la cuestión, se sentía obligado a hacer reservas sobre el procedimiento seguido. Era bien sabido que de conformidad con el Capítulo XI de la Carta, no se autorizaba la presencia de peticionarios procedentes de territorios no autónomos. Sin embargo, si se consideraba que las disposiciones de los Capítulos XII y XIII constituían una excepción a las del Capítulo XI, al referirse a los territorios no metropolitanos, el cambio debía haberse puesto a votación. En el pasado, en circunstancias similares, la delegación de España había pedido esa votación, y podía haberlo hecho nuevamente, pero, en vez de ello, se limitaba a pedir que se dejase constancia de sus reservas.

85. En cuanto al párrafo 2 de la parte dispositiva, recordó que su Gobierno había reconocido el derecho de los territorios a la libre determinación y la independencia mucho antes que las Naciones Unidas hicieran recomendaciones a ese respecto. En vista de la conocida posición de su Gobierno y del hecho de que se había creado un gobierno autónomo, el orador estimaba que la reafirmación contenida en el párrafo 2 era inútil.

86. Dijo que la mención, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, de la aceleración del cumplimiento de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX) de la Asamblea General movía a su delegación a recordar al Comité Es-

pecial que la Potencia Administradora no tenía nada que ocultar, hecho que quedaba demostrado por su oferta de recibir un subcomité investigador en dicho Territorio. Esta invitación no se había hecho con el único propósito de acelerar la aplicación de las resoluciones pertinentes, sino más bien con el de permitir que el subcomité comprobase efectivamente la verdadera situación. No podía llegarse a ninguna conclusión por adelantado, ni aun esbozarse una; si ello fuera posible, no tendría ningún objeto visitar el Territorio.

87. Por último, manifestó que la delegación de España sabía perfectamente que cuando el Presidente del Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial había asumido sus funciones, lo había hecho en nombre de España, pero con la autoridad que le había conferido el pueblo por sufragio universal. Lo mismo sucedía en el caso del Sr. Gori Molubela, Presidente de la Asamblea. Esas elecciones se habían previsto en la Ley por la que se había proclamado la libre determinación, que también había conferido al Territorio el nombre de Guinea Ecuatorial, mencionado en la resolución. Estos hechos demostraban también que las Naciones Unidas habían aceptado la Ley mencionada, en relación con la cual la Cuarta Comisión había ordenado, en noviembre de 1965, a solicitud del Sr. Ondó Edú, que se distribuyera la declaración del Presidente del Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial como documento de la Asamblea General. Añadió que quería agradecer una vez más al Comité Especial su reconocimiento de la labor realizada por la Potencia Administradora, y solicitó que su declaración se incluyera en las actas del Comité.

88. El Presidente dijo que el Comité Especial había tenido siempre por norma oír en cualquier parte a peticionarios procedentes de los países enumerados en su lista y que, por ello, había concedido audiencia en El Cairo a un peticionario de la Guinea Ecuatorial.

89. El representante de Polonia apuntó que había escuchado con pesar la declaración del representante de España y consideraba que su actitud era retrógrada. Le parecía inútil que el subcomité fuera al Territorio si no había de escuchar a los peticionarios.

90. El representante de España dijo que no se trataba de que la Potencia Administradora deseara inmiscuirse en los trabajos del Comité, pero que su delegación tenía derecho, como representante de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, a formular una reserva.

91. En su 460a. sesión, el Comité Especial, a propuesta del Presidente, decidió que el Subcomité sobre Guinea Ecuatorial estaría compuesto de representantes de Chile, Dinamarca, Malí, Polonia, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona y Siria.

E. NUEVO EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁶

Introducción

92. El Comité Especial examinó de nuevo la cuestión de Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) en su 482a. sesión, celebrada en la Sede el 18 de noviembre de 1966. El Comité tuvo ante sí el informe del

⁶ Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) para una reseña de las discusiones sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a los Territorios considerados por el Comité durante sus reuniones en África.

Subcomité de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), que aparece como anexo del presente informe.

93. En cartas de fecha 14 y 17 de noviembre de 1966 (A/AC.109/213, A/AC.109/215), los Representantes Permanentes del Camerún y de España solicitaron autorización para que delegaciones de sus respectivos países participaran en las deliberaciones sobre la cuestión de Guinea Ecuatorial. En su 482a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, acceder a estas solicitudes.

Peticiones escritas

94. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones escritas adicionales referentes a Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni):

<i>Peticionario</i>	<i>Documento No.</i>
Tres peticiones del Sr. Jesús Mba Ovono, Secretario General de Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE)	A/AC.109/PET.500/Add.1
Petición de IPGE	A/AC.109/PET.500/Add.2
Sr. Jesús Mba Ovono, Secretario General de IPGE	A/AC.109/PET.500/Add.3
Dos peticiones del Sr. Pastor Torao Sikara, Presidente General, y de otros miembros del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MNLGE)	A/AC.109/PET.529
Petición del Comité del Exterior del MNLGE	A/AC.109/PET.529/Add.1
Sr. Pastor Torao Sikara, Presidente General del MNLGE ...	A/AC.109/PET.529/Add.2
Sr. J. W. Okori-Dougan	A/AC.109/PET.570

F. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ DE LA GUINEA ECUATORIAL (FERNANDO POO Y RÍO MUNI)

95. En la 482a. sesión, el Presidente del Comité Especial, hablando en su carácter de Presidente del Subcomité de la Guinea Ecuatorial, presentó el informe del Subcomité (véase anexo). En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución aprobada por el Comité Especial en su 454a. sesión (véase párr. 79 *supra*), el Subcomité había visitado Madrid y la Guinea Ecuatorial en agosto de 1966, y tenido ocasión de sostener conversaciones con funcionarios del Gobierno español y con gran número de órganos e individuos de la Guinea Ecuatorial. En la sección I del informe se daba información sobre el Territorio, en las secciones II y III se resumían las conversaciones y las consultas que sostuvo el Subcomité durante sus visitas a España y al Territorio, y en la sección IV se enunciaban las conclusiones y recomendaciones del Subcomité. Le complacía señalar que, gracias al espíritu de transacción de que dieron muestras todos sus miembros, el Subcomité había podido aprobar el informe por unanimidad. Recomendaba su aprobación al Comité Especial.

96. El representante de España dijo que el Territorio de Guinea Ecuatorial, aunque alejado de España geográficamente, estaba íntimamente ligado al corazón de España ya que era el único territorio del África Ecuatorial de habla española y de costumbres españolas. El pueblo del Territorio se preparaba para una

tarea trascendente en el curso de su historia, pero al mismo tiempo no quería romper sus relaciones con España y quería seguir recibiendo ayuda de ella.

97. Cuando invitó al Comité Especial a que visitara el Territorio, España sabía que esa invitación constituía un paso decisivo en las labores del Comité. Al orador le satisfacía que el Subcomité hubiese apreciado y reconocido esta colaboración española en el proceso de la descolonización, pero España habría deseado que el Subcomité hubiera podido prestar mayor atención a la labor realizada por España en el Territorio.

98. El representante de España manifestó que no podía discutir a fondo el informe del Subcomité ya que acababa de recibir el texto y ni el Gobierno español ni el Gobierno Autónomo de la Guinea Ecuatorial habían podido estudiarlo todavía. Ello no obstante, haría algunos comentarios preliminares. En primer lugar, deseaba rendir homenaje al Subcomité, que había conseguido elaborar un informe tan detallado como resultado de una visita tan breve. La delegación de España discrepaba sobre la recomendación de que se fijase una fecha para la concesión de la independencia, si bien era cierto que en el párrafo 294 se reconocía que la fijación de esa fecha habría de quedar supeditada al resultado de las conversaciones que se celebrasen entre los representantes del Territorio y las autoridades españolas. España consideraba que en el momento en que ejercitase su autodeterminación, era la población la que debería fijar la fecha de la independencia, si así lo deseaba.

99. Aunque el orador no podía ocultar su sorpresa ante el hecho de que en algún momento se hubiese pretendido dar menor importancia a las autoridades autónomas prefiriendo reuniones con grupos e individuos no representativos, tenía la impresión de que el Subcomité había podido percatarse de las cualidades de las autoridades elegidas en el Territorio. Le sorprendían también los comentarios relativos a la falta de libertad en la actividad política, ya que los miembros del Subcomité tuvieron oportunidad de comprobar la existencia de partidos políticos en el Territorio.

100. El orador había leído con interés cuanto decía el informe en favor del mantenimiento de la unidad del Territorio; precisamente porque tal era también el criterio del Gobierno español, se había concedido la autonomía a la Guinea Ecuatorial como territorio unido. Cabía preguntarse, sin embargo, si el informe no minimizaba los problemas planteados.

101. La importancia que se atribuía a los poderes del Comisario General y la sugestión de que la autonomía era ficticia estaban explícitamente contradichas en el propio informe. Los miembros del Subcomité tuvieron ocasión de verificar que no existían en la práctica esas supuestas amplias atribuciones del Comisario General. Al orador le habría gustado ver una referencia al alto nivel económico, educativo, sanitario y laboral del Territorio, establecida comparativamente con la zona geográfica en que éste estaba enclavado.

102. En relación con las críticas que podían hacerse a la ordenación política del Territorio, el orador deseaba señalar que la Ley de Autonomía era un producto de las conversaciones que celebraron los representantes del Territorio con el Gobierno español, y fue sometida a un referéndum en el que participaron todos los habitantes, hombres y mujeres, adultos. En la propia Ley de Autonomía estaban previstas las eventuales modificaciones a través de los cauces establecidos. So-

bre todo, los habitantes disponían del derecho de autodeterminación para fijar su propio futuro.

103. El representante de Malí consideraba que las conclusiones y recomendaciones del Subcomité eran de gran importancia. Sin embargo, su delegación estimaba también muy importante el hecho de que los territorios de Fernando Poo y Río Muni habían sido unidos bajo la Ley de Autonomía para constituir el Territorio de la Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, si bien estaba de acuerdo con la recomendación del párrafo 301 del informe acerca de la transferencia inmediata de todos los poderes al pueblo, estimaba que se debía precisar claramente que, de conformidad con la Ley de Autonomía, era el Territorio unido de la Guinea Ecuatorial el que había de alcanzar la independencia.

104. El representante de Australia dijo que su delegación consideraba que hacía honor a España el que el Gobierno español hubiese invitado al Subcomité a visitar el Territorio. Elogió al Subcomité por su diligencia y realismo; en general, sería difícil poner reparos a sus conclusiones y recomendaciones. Su delegación atribuía particular importancia al párrafo 304 en el que se recomendaba la introducción de un sistema electoral basado en el sufragio universal de los adultos. En cuanto al párrafo 301, entendía que la recomendación de que se fijase una fecha para la independencia que no fuese posterior a julio de 1968 estaba calificada por las palabras "en respuesta a los deseos de la población". Su delegación esperaba que fuesen los representantes del pueblo, elegidos sobre la base de "un hombre, un voto" los que fijasen esa fecha, en consulta con las autoridades españolas. Habría preferido que no se indicase en el párrafo ninguna fecha límite y que se dejase enteramente la cuestión a los representantes del pueblo.

105. El representante del Irán dijo que se debía felicitar al Subcomité por el minucioso estudio que había hecho de la cuestión de la Guinea Ecuatorial. En vista de que el Subcomité había aprobado su informe por unanimidad, proponía que el Comité Especial aprobase el informe e hiciese suyas las conclusiones y recomendaciones que contenía, en el entendimiento de que las observaciones y reservas de las delegaciones se incluirían en el acta de la sesión.

106. El representante de la República Unida de Tanzania elogió el espíritu de cooperación de que había dado muestras la Potencia Administradora y la moderación con que el representante de España había expuesto sus opiniones sobre el informe. En cuanto a las observaciones del representante de Australia, deseaba precisar que la cuestión de la fijación de una fecha para la independencia fue planteada por personas con las que el Subcomité se entrevistó en el Territorio; por eso se había incluido en el párrafo 301 la referencia a "los deseos de la población". Estaba totalmente de acuerdo en que eran los deseos de la población de la Guinea Ecuatorial los que habían de ser decisivos; naturalmente la población estaba en libertad de modificar su decisión, aunque el orador ciertamente esperaba que no decidirían que no deseaban la independencia para julio de 1968. En vista de que el tiempo apremiaba podían dejarse los detalles de la cuestión para los debates de la Cuarta Comisión, incluido el punto planteado por el representante de Malí. Entretanto, apoyaba la propuesta del representante del Irán.

107. El representante de Dinamarca dijo que en su carácter de miembro del Subcomité deseaba expresar su satisfacción por la colaboración que España había prestado al Subcomité. La recomendación relativa a la fecha de la independencia había sido objeto de largas discusiones en el Subcomité y su delegación había abrigado algunas dudas al respecto; no obstante, aceptó la inclusión de dicha recomendación en vista de la referencia a los deseos de la población. La mención de una fecha se había hecho en atención a los deseos expresados por los habitantes, ya que el Subcomité tuvo la clara impresión de que la inmensa mayoría del pueblo deseaba la independencia para julio de 1968 a más tardar.

108. El representante del Reino Unido dijo que no deseaba oponerse a la propuesta del Irán. Su delegación no había tenido tiempo de estudiar el informe y por tanto no estaba en condiciones de expresar sus opiniones al respecto, pero no deseaba por ello retrasar la decisión del Comité Especial.

109. El representante de los Estados Unidos de América dijo que tampoco se oponía a la propuesta del Irán. Su delegación deseaba expresar su aprecio por el arduo trabajo que había llevado a cabo el Subcomité y por la cooperación del Gobierno español. Deseaba que constase en el acta la reserva de su delegación en cuanto al párrafo 301, por razones análogas a las expuestas por el representante de Australia, y al párrafo 309.

110. El representante de Madagascar apoyó la opinión expresada por el representante de Malí y pidió que se incluyera en el párrafo 301 una frase en que se indicase que se entendía que la independencia se concedería a la Guinea Ecuatorial como una sola entidad, con arreglo a la Ley de Autonomía y a las resoluciones de las Naciones Unidas.

111. El representante de Venezuela dijo que podía aceptar la propuesta del Irán, pero deseaba señalar que su delegación no había tenido oportunidad de estudiar el informe y por tanto se reservaba el derecho de plantear en la Cuarta Comisión las cuestiones pertinentes.

112. El representante del Camerún dijo que había muchos lazos históricos y tradicionales entre su país y la Guinea Ecuatorial y muchos grupos étnicos comunes a ambos. Por tanto, su delegación agradecía especialmente las declaraciones que favorecían la emancipación del Territorio.

113. La propuesta de los representantes de Malí y de Madagascar de que se añadiese una frase al párrafo 301 del informe del Subcomité (véase anexo) no constituía una enmienda al informe. Esa adición pondría de relieve el contenido del párrafo 291, en el que se decía claramente que sólo una pequeña minoría entre los bubis de Fernando Poo y algunos intereses creados eran partidarios de la separación de Fernando Poo y Río Muni. La mayoría de la población de la Guinea Ecuatorial deseaba indiscutiblemente que su país fuese independiente como un Estado único.

114. En la 482a. sesión, celebrada el 18 de noviembre de 1966, el Comité Especial decidió aprobar la propuesta del representante del Irán. En virtud de esta decisión, el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité de la Guinea Ecuatorial (véase anexo) e hizo suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo, en la inteligencia de que las observaciones y reservas formuladas por los miembros aparecerían en el acta.

ANEXO

[A/AC.109/L.348]

**Informe del Subcomité de la Guinea Ecuatorial
(Fernando Poo y Río Muni)***Relator: Sr. Rafik JOUÉJATI (Siria)*

INDICE

	<i>Párrafos</i>
Introducción	1-13
I. Información sobre el Territorio	14-77
II. Conversaciones con funcionarios del Gobierno español	78-120
III. Consultas con la población del Territorio....	121-285
IV. Conclusiones y recomendaciones	286-310
V. Aprobación del informe	311

Apéndices

	<i>Página</i>
I. Itinerario y programa de reuniones	667
II. Representantes de las corporaciones y de las cooperativas elegidos para los concejos municipales	667
III. Representantes de cabezas de familia elegidos para los concejos municipales	668
IV. Distribución del electorado (cabezas de familia) al nivel de los concejos municipales en 1964	668

INTRODUCCIÓN

1. En su 454a. sesión, celebrada el 21 de junio de 1966, el Comité Especial aprobó una resolución relativa a la Guinea Ecuatorial (véase cap. V, párr. 79) que, en los párrafos 1 y 3 de su parte dispositiva, decía así:

"1. Toma nota con satisfacción de la abierta invitación que le ha hecho la Potencia Administradora para que visite la Guinea Ecuatorial.

"3. Decide enviar a la Guinea Ecuatorial, tan pronto como sea posible, un subcomité encargado de averiguar cuál es la situación en el Territorio, con miras a acelerar la aplicación de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX) de la Asamblea General."

2. En la 460a. sesión, celebrada el 5 de agosto de 1966, el Presidente informó al Comité Especial que el Gobierno de España estaba dispuesto a recibir al Subcomité en la tercera semana del mes de agosto de 1966, y consentía en que visitara seguidamente al Territorio durante unos ocho días.

3. En la misma sesión el Comité Especial, a propuesta de su Presidente, decidió sin objeciones que el Subcomité de la Guinea Ecuatorial estaría integrado por Chile, Dinamarca, Malí, Polonia, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona y Siria. El Subcomité quedó compuesto con los siguientes representantes: Sr. Gershon B. O. Collier (Sierra Leona) (Presidente); señor Hernán Sánchez (Chile); Sr. Skjold G. Mellbin (Dinamarca); Sr. Iaya Diakite, (Malí); Sr. Kazimierz Smigajowski (Polonia); Sr. John W. S. Malecela (República Unida de Tanzania); Sr. Rafik Jouéjati (Siria).

4. Después de consultar con el Gobierno español, el Subcomité se trasladó a Madrid en la mañana del 17 de agosto de 1966, permaneciendo allí hasta la noche del día siguiente. Durante su estancia en dicha ciudad, el Subcomité celebró reuniones con altos funcionarios del Gobierno español, de las que se hace un relato en la sección II de este informe.

5. A continuación, el Subcomité visitó la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) entre el 19 de agosto y el 24 de

agosto de 1966. Estuvo en Fernando Poo del 19 al 21 de agosto de 1966 y en Río Muni los días 22 a 24.

6. A la llegada del Subcomité al Territorio, las autoridades locales, a petición suya, dispusieron lo necesario para que se informara al público, a través de la prensa y de la radio, del propósito de la visita del Subcomité al Territorio, sus atribuciones, su programa y su deseo de recibir testimonios orales y escritos de todas las entidades, grupos e individuos que desearan ponerse en contacto con él.

7. Durante su estancia en el Territorio, el Subcomité celebró entrevistas y sostuvo conversaciones con el Comisario General y otros funcionarios, de las que se hace un relato en la sección II. También se entrevistó con miembros de los órganos de gobierno y legislativos, y con gran número de entidades, grupos e individuos; estas entrevistas se reseñan en la sección III de este informe. Los miembros del Subcomité establecieron también contactos y conversaciones oficiosos con un número considerable de personalidades e individuos del Territorio.

8. El itinerario y el programa seguidos por el Subcomité en Madrid y en la Guinea Ecuatorial figuran en el apéndice I. En su visita, el Subcomité fue acompañado por el siguiente personal de secretaría: el Sr. K. K. S. Dadzie (primer secretario); el Sr. Richard W. Wathen (oficial político y administrativo); los Sres. Pierre Dufour y Juan Rodríguez (intérpretes); y la Sra. Cecilia T. Bowles (secretaria).

9. El Subcomité volvió a reunirse en la Sede el 30 de septiembre de 1966. Entre esa fecha y el 18 de octubre, en que aprobó su informe, celebró trece sesiones.

10. En la sección I de este informe figura la información recogida por el Subcomité sobre la situación en el Territorio. En la sección V aparecen sus conclusiones y recomendaciones.

11. El Subcomité expresa su agradecimiento al Gobierno español por su invitación para visitar Madrid y el Territorio, por la favorable acogida y hospitalidad que le fueron brindadas y por medios puestos a su disposición por los funcionarios españoles encargados de organizar lo necesario para su visita. El Subcomité agradece también la asistencia y cooperación que le han prestado el Comisario General y sus subordinados.

12. El Subcomité desea asimismo expresar su gratitud por la calurosa bienvenida y las facilidades que les dieron el Consejo de Gobierno y las dos diputaciones del Territorio. También desea rendir homenaje a la cordialidad de la recepción, la generosidad y la cooperación encontradas en las diversas entidades, grupos e individuos con que se puso en contacto.

13. La visita del Subcomité a la Guinea Ecuatorial y su breve estancia en Madrid, fueron muy útiles para aclarar los problemas del Territorio. La visita, especialmente, fue de gran ayuda, al permitir al Subcomité comprobar la situación del Territorio y conocer directamente las aspiraciones de la población de la Guinea Ecuatorial.

I. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

A. Generalidades

14. El Territorio de la Guinea Ecuatorial está compuesto por las provincias de Fernando Poo y Río Muni, la primera de las cuales comprende la isla de su nombre, los islotes adyacentes y la isla de Annobón, en tanto que la segunda abarca la zona continental que limita al norte con Camerún y al sur y el este con Gabón, y las islas de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y los islotes adyacentes. La extensión superficial de Fernando Poo es de 2.034 kilómetros cuadrados, y la de Río Muni de 26.017 kilómetros cuadrados. La capital de Fernando Poo es Santa Isabel, y la de Río Muni, Bata.

15. La población total del Territorio se calcula hoy en 260.000 habitantes. Según el censo de 1960, en el que la población total era de 245.989 habitantes, 62.612 vivían en Fernando Poo y

183.377 en Río Muni. De los que vivían en Fernando Poo, 58.390 eran africanos, incluidos trabajadores nigerianos y otros grupos no naturales del Territorio, y 4.222 europeos, en tanto que las cifras en Río Muni eran 180.513 y 2.864 respectivamente. La densidad de población era de 31 y 7 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. La mayor concentración urbana es Santa Isabel que, en 1963, tenía una población calculada en unos 28.000 habitantes. La segunda ciudad es Bata, con una población que, en 1963, se calculaba en 25.700 habitantes.

16. La población indígena está compuesta principalmente por dos grupos, los bubis, de Fernando Poo, y los fangs (también llamados pámués), de Río Muni. Otros grupos menores de Río Muni son los kombes, bengas y bujebas. No se dispone de estadísticas detalladas. Existe una importante población africana no indígena, principalmente procedente de Nigeria, que en 1966 asciende aproximadamente a 32.000 habitantes, los cuales trabajan en el Territorio, por lo general, con contratos a plazo fijo; este grupo de población es más numeroso en Fernando Poo. La población no africana es casi totalmente española.

B. Gobierno

Constitución de 1963/1964

17. Fernando Poo y Río Muni, a los que en 1959 se había concedido el estatuto de provincias españolas, fueron objeto en 1963 de una nueva estructuración constitucional, bajo el nombre de Guinea Ecuatorial. Esa estructuración se definía en la Ley de Bases No. 191/1963, de 20 de diciembre, por la que se concedió a la Guinea Ecuatorial, según sus propias palabras, "un régimen de autonomía".

18. La nueva estructura constitucional se originó con una declaración del Gobierno español a raíz de una decisión adoptada en Consejo de Ministros el 9 de agosto de 1963 acerca de la concesión de la autonomía al Territorio. Una comisión de las Cortes españolas, de la que formaban parte representantes del Territorio, elaboró un proyecto de Ley de Bases sobre el nuevo régimen político-administrativo. El proyecto de Ley fue aprobado por las Cortes. Antes de ser sancionada por el Jefe de Estado, la Ley se sometió a un plebiscito, celebrado el 15 de diciembre de 1963, en el que podían participar todos los nacionales — africanos y españoles — mayores de 21 años, debidamente inscritos. La población africana no natural del Territorio no podía por tanto votar en tales circunstancias.

19. El número de electores inscritos en el plebiscito fue de 126.378: 17.699 en Fernando Poo y 108.679 en Río Muni. Según la Potencia Administradora, los resultados del plebiscito fueron los siguientes:

	Votos depositados	A favor	En contra
Fernando Poo	12.500	5.340	7.150
Río Muni	82.317	53.940	28.387
TOTAL	94.817	59.280	35.537

20. El 20 de diciembre de 1963, a raíz del plebiscito, se promulgó la Ley de Bases. En el primer semestre de 1964 se crearon los diversos consejos previstos en la Ley de Bases. El Consejo de Gobierno se constituyó el 15 de mayo de 1964, y el 27 de mayo del mismo año se nombró su Presidente. El régimen de autonomía entró en vigor el 16 de julio de 1964.

21. Por Decreto 1885/1964, de 3 de julio de 1964, se promulgó una ley en la que se establecía un texto articulado de la Ley de Bases del régimen autónomo. Esta Ley Articulado sobre régimen autónomo de la Guinea Ecuatorial fue elaborada de conformidad con la cláusula primera de las disposiciones finales de la Ley de Bases por la que se facultaba al Gobierno español a dictar el texto articulado de esa Ley, con audiencia de los representantes del régimen autónomo, incluido

el Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial. La Ley Articulado contiene los fundamentos esenciales legislativos del actual régimen de autonomía.

22. La Ley de Bases estipula que los nacionales naturales de Fernando Poo y Río Muni tienen los mismos derechos y deberes reconocidos a los "demás españoles" por las leyes fundamentales, y que "el derecho de representación en Cortes queda garantizado como hasta el presente". En virtud de tales disposiciones, Fernando Poo y Río Muni están representados en las Cortes lo mismo que las restantes provincias españolas, y cada provincia del Territorio envía tres procuradores. Estos procuradores son los alcaldes de Santa Isabel y Bata, un procurador de Fernando Poo y uno de Río Muni, que representan a las restantes corporaciones y entidades locales, y un representante de cada una de las diputaciones, actualmente sus Presidentes.

Organos de gobierno

23. La Ley de Bases establece que el Gobierno y administración de la Guinea Ecuatorial tendrá carácter representativo y estará encomendado a una Asamblea General y a un Consejo de Gobierno. Además de prever la creación de esos órganos, la Ley establece el cargo de Comisario General, quien representa al Gobierno español en el Territorio y es nombrado por Decreto del Jefe del Estado español.

24. El Consejo de Gobierno está constituido por un Presidente y ocho consejeros, cuatro de Fernando Poo y cuatro de Río Muni. Los consejeros son elegidos por la Asamblea en tanto que el Presidente es nombrado por decreto, a propuesta en terna del Consejo de Gobierno. Su mandato es de cuatro años. El actual Presidente del Consejo de Gobierno es el señor Bonifacio Ondó Edú.

25. La Asamblea General está constituida por la reunión conjunta de las diputaciones de Fernando Poo y Río Muni. Celebra, al menos, dos períodos de sesiones anuales, que tienen lugar, alternativamente, en Santa Isabel y Bata. Dentro de sus esferas de competencia, las dos diputaciones son los órganos de la administración local en sus respectivas provincias. Las diputaciones de Fernando Poo y Río Muni están formadas por ocho y diez diputados, respectivamente. En el caso de que alguno de sus miembros sea elegido por la Asamblea General para el Consejo de Gobierno, la vacante se cubre según el procedimiento electoral que más adelante se expone (véanse párrafos 40 a 42).

Poderes y atribuciones de los órganos de gobierno

26. De conformidad con la Ley de Bases de 1963, el Consejo de Gobierno ejerce las funciones que anteriormente competían al Gobernador General, a excepción de las que se asignan al Comisario General. Los miembros del Consejo pueden encargarse, por designación del Presidente, de uno o varios servicios de la administración. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Articulado, la dirección de esos servicios está a cargo de funcionarios técnicos nombrados por el Gobierno español a propuesta del Comisario General, como consecuencia de las peticiones formuladas por el Presidente del Consejo de Gobierno. Es de la competencia del Consejo remitir a la Asamblea General proyectos de disposiciones, elaborar el proyecto anual del presupuesto general de ingresos y gastos de las provincias (pero no el de las subvenciones del Gobierno español) y velar por la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea General dentro de la esfera de su competencia. Asimismo propone, en terna, candidatos para su propia Presidencia entre los cuales nombra uno, por Decreto, el Gobierno español. También tiene las mismas atribuciones en relación con el nombramiento del Gobernador Civil de cada provincia. El Consejo de Gobierno puede designar un delegado en Madrid para el mejor despacho y coordinación de los asuntos de la administración autónoma relacionados con la competencia de los distintos organismos oficiales.

27. Una importante limitación de tales atribuciones, sin embargo, son las conferidas al Comisario General, quien, como re-

* Para el texto de la citada Ley de Bases véase el anexo del documento A/AC.109/71.

presentante del Gobierno español, tiene, entre otras, las siguientes:

- a) Coordina la administración autónoma con la administración central;
- b) Asesora al Consejo de Gobierno en el desempeño de su función;
- c) Vela por el orden público, con cuya finalidad dependen de él las Fuerzas Armadas, y puede, en la medida que lo estime oportuno, delegar sus facultades en esta esfera en los gobernadores civiles que, en estas cuestiones, dependen de él;
- d) Asume las relaciones con cualquier autoridad ajena a la Guinea Ecuatorial;
- e) Puede proponer al Gobierno español la suspensión de los actos del Consejo de Gobierno en los siguientes casos:
 - i) Cuando recaigan en asuntos que no sean de la competencia del Consejo;
 - ii) Cuando constituyan delito;
 - iii) Cuando sean contrarios al orden público, y
 - iv) Cuando constituyan infracción manifiesta de las leyes.

"Si la ejecución de dichos actos hubiera de ocasionar graves perjuicios", el Comisario General puede suspenderlos por sí mismo, dando cuenta después al Gobierno español. El Comisario General puede proponer también la remoción del Presidente y los consejeros del Consejo de Gobierno. Tiene también facultades para intervenir en materia de información, actividades recreativas, correos y telecomunicaciones, y aeropuertos. Son de su competencia además la inmigración y la policía.

28. Entre las funciones de la Asamblea General se encuentran:

- a) Proponer normas jurídicas aplicables al ámbito territorial, como complemento de las leyes vigentes. Tales propuestas, cuya sanción corresponde al Comisario General, pueden ser devueltas a la Asamblea para nuevo examen. Si la Asamblea mantiene su acuerdo anterior, la decisión final corresponde al Gobierno español.
- b) Aprobar el presupuesto general de la Guinea Ecuatorial elaborado por el Consejo de Gobierno. No obstante, la Ley de Bases establece que, en tanto el Estado español subvencione en forma directa o indirecta la economía de la Guinea Ecuatorial, su presupuesto será sometido anualmente a la aprobación de las Cortes españolas.
- c) Solicitar, por mayoría de dos tercios, modificaciones de la legislación vigente, que, después de informadas por el Comisario General, se elevan al Gobierno español para su aprobación.

29. La Asamblea General, que elige a los ocho miembros del Consejo de Gobierno, puede proponer también su remoción, así como la del Presidente del Consejo, por mayoría de dos tercios. El Comisario General, como queda dicho, puede hacer también tal propuesta. La decisión final al respecto corresponde al Gobierno español.

30. En cada una de las provincias existe un Gobernador Civil, que representa al Consejo de Gobierno aunque, como se ha dicho anteriormente, el mantenimiento del orden público es de la competencia del Comisario General. De acuerdo con la Ley Articulada, los gobernadores civiles deben ser naturales y autóctonos de los territorios a que se destinen.

Sistema electoral

31. En la base V de la Ley de Bases se describe el régimen de autonomía de la Guinea Ecuatorial como de carácter representativo y en la Base XII se establece que las diversas corporaciones públicas se organizarán con arreglo a los principios de carácter representativo orgánico. En el artículo 12 de la Ley Articulada se describe el régimen como de carácter representativo "orgánico". Ello es reflejo del importante papel desempeñado por las "corporaciones" — organismos corporativos o entidades económicas, culturales y profesionales que reciben diversos nombres — y las cooperativas en la represen-

tación del pueblo, las cuales se basan en la filosofía corporativista que defiende que el hombre queda mejor representado según la función que desempeña en la sociedad.

32. Cada una de las diputaciones que, en reunión conjunta, constituyen la Asamblea General del Territorio, está compuesta del siguiente modo: la mitad de sus miembros son elegidos por las entidades corporativas (económicas, culturales y profesionales) y las cooperativas, y la otra mitad por los ayuntamientos. En el párrafo 42 *infra* se hace una enumeración de esos organismos.

33. Por lo que se refiere a los ayuntamientos, la mitad de sus miembros son elegidos también por las entidades corporativas y cooperativas, y la otra mitad por los cabezas de familia del distrito electoral. El número de concejales de cada ayuntamiento depende del número de habitantes de la localidad de que se trate. Los Alcaldes-Presidentes de los ayuntamientos son nombrados entre los respectivos concejales por el Gobernador Civil (véase párr. 30), a propuesta en terna de dichos ayuntamientos. No obstante, los alcaldes-presidentes de Santa Isabel y Bata son nombrados por el Gobierno español, a propuesta en terna de los respectivos ayuntamientos. El número de ayuntamientos, según la Orden de 24 de mayo de 1962, es de cuatro en Fernando Poo y de 11 en Río Muni.

34. Por debajo de los ayuntamientos se encuentran las juntas vecinales, compuestas por un jefe y cuatro vocales elegidos por los cabezas de familia. Hay que observar, sin embargo, que estas juntas se ocupan exclusivamente de asuntos locales y no desempeñan papel alguno en la constitución de las diputaciones, la Asamblea General o el Consejo de Gobierno. El número de juntas vecinales, según la Orden de 24 de mayo de 1962, es de 42 en Fernando Poo y de 146 en Río Muni.

35. Teniendo en cuenta la importante función que desempeñan las entidades corporativas y las cooperativas en el sistema electoral introducido en la Guinea Ecuatorial, es necesario describirlas más detenidamente. Como se ha observado anteriormente, eligen a la mitad de los miembros de las diputaciones y a la mitad de los concejales de los ayuntamientos, los cuales, a su vez, eligen a la otra mitad de los diputados. Además, como se verá más adelante, las entidades corporativas y las cooperativas concretas a las que se concede el derecho de representación son, en la práctica, fundamentalmente las mismas en las elecciones municipales y en las provinciales.

36. En los ayuntamientos, el sistema de elección de los representantes de las entidades corporativas (económicas, culturales y profesionales) y de las cooperativas es el establecido en la Instrucción de 25 de enero de 1964, dictada por el anterior Gobernador General. En ella se invitaba a las entidades corporativas y a las cooperativas a que designaran cada una un compromisario. Estos compromisarios, en unión de los demás designados por las restantes entidades corporativas y por las cooperativas de la región, procedieron a elegir a los representantes de sus respectivos ayuntamientos. Esos representantes debían ser vecinos mayores de 23 años que pertenecieran a las entidades en cuestión. Sus candidaturas fueron presentadas por esas entidades al propio tiempo que nombraban sus compromisarios para que actuaran como electores en el proceso. Las entidades corporativas y las cooperativas con derecho a nombrar compromisarios y a proponer candidatos para la elección de representantes en sus respectivos ayuntamientos eran las siguientes:

1. *Entidades corporativas que tienen derecho a nombrar compromisarios para las elecciones municipales*

a) En la provincia de Fernando Poo

Para San Carlos

- i) Cámara Oficial Agrícola de Comercio e
- ii) Comisión Administrativa del Puerto Industria,

Para Santa Isabel

- iii) Caja Provincial de Seguros Sociales
- iv) Cámara Oficial Agraria de Comercio e Industria

- v) Comisión Administrativa del Puerto
- vi) Escuela Normal del Magisterio
- vii) Escuela Superior Provincial de Santo Tomás de Aquino
- viii) Ilustre Colegio de Abogados
- ix) Instituto Nacional de Enseñanza Media

b) *En la provincia de Río Muni*

Para Bata

- x) Cámara Agrícola, Forestal, de Comercio e Industria
- xi) Comisión Administrativa del Puerto
- xii) Escuela de Artes y Oficios
- xiii) Escuela Normal del Magisterio
- xiv) Ilustre Colegio de Abogados
- xv) Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media

Para Río Benito

- xvi) Sindicato Maderero

2. *Cooperativas que tienen derecho a nombrar compromisarios para las elecciones municipales*

a) *En la Provincia de Fernando Poo*

Para Annobón

- i) Cooperativa de San Antonio

Para San Carlos

- ii) - xvii) Cooperativas de Claret de Batete, Bocatorico, Balombe, San Luis de Bombe, Boloco, Bantabaré, Balachá-Maule, Baho Pequeño, Baho Grande, Bilelipa, Eburu-Ehoco, Moca, Musola, Mueri, Rilaja-Oloitia, Ruitche y Ureca

Para Santa Isabel

- xviii) - xxiv) Cooperativas de Bancey, Basacato de la Sagrada Familia, Bariobé, Bacaque Pequeño, Bacaque Grande, San Luis de Cupapa y Santa Teresa de Bososo
- xxv) Unión Provincial de Cooperativas del Campo
- xxxvi) Cooperativa Provincial de Transportes Ligeros

b) *En la Provincia de Río Muni*

Para Bata

- xxvii) Unión Provincial de Cooperativas del Campo

Para Ebebiyín

- xxviii) Cooperativa de San Juan Bautista del Río Nsie
- xxix) Cooperativa de San Jenaro de Oveng

Para Micomeseng

- xxx) Cooperativa de Santiago de Ncomo

Para Valladolid de los Bimbiles

- xxxi) Cooperativa de Medina del Bosque

37. Estas entidades eligieron, en total, 58 representantes para los ayuntamientos de Fernando Poo y Río Muni, oscilando el número de representantes por municipio entre 2 y 5, según su importancia^b. Los cabezas de familia, por su parte,

eligieron también un total de 58 representantes, distribuidos a razón de 2 a 5 representantes por municipio también según su importancia^c.

38. El número de los restantes electores que participaron en las elecciones municipales fue de 45.286^d. Eran los cabezas de familia, que eligieron la mitad de los concejales que les correspondía. A los efectos electorales, son cabezas de familia los mayores de 21 años con personas a su cargo, o los mayores de 21 años sin personas a su cargo que no vivan en un grupo familiar. Deben ser vecinos debidamente inscritos en el censo electoral confeccionado por la Delegación de Estadística del Territorio. Quedan incluidos los residentes españoles ("demás nacionales"), que de acuerdo con la Ley Articulada tienen los mismos derechos y deberes que los naturales siempre que sean avecindados y estén debidamente inscritos como tales.

39. Los candidatos o concejales por el grupo de representación familiar deben ser cabezas de familia mayores de veintitrés años y vecinos de los respectivos municipios, y pueden solicitar por sí mismos, directamente, de la Junta Municipal del Censo, ser proclamados tales, o ser propuestos a ésta, si reúnen las siguientes condiciones:

a) Esta desempeñando o haber desempeñado el cargo de concejal en el propio ayuntamiento durante un año como mínimo.

b) Ser propuestos por cuatro concejales o ex concejales del mismo ayuntamiento, por tres diputados provinciales o por dos procuradores en Cortes.

c) Ser propuestos por la vigésima parte del total de electores inscritos en el municipio de que se trate.

d) Estar afincados en el municipio de que se trate, ejerciendo en él actividades agrícolas, industriales o mercantiles.

Los candidatos propuestos no pueden ser proclamados tales si son deudores a fondos públicos, han sido condenados a penas de prisión o han sido inhabilitados para cargos públicos, o tengan entablados litigios con el ayuntamiento de que se trate, ni tampoco los empresarios que suministren artículos o servicios a los municipios, y sus empleados, y los concesionarios o licitadores en contratos o suministros con cargo a fondos públicos administrados por el ayuntamiento de que se trate.

40. En las diputaciones, como antes se ha dicho, la mitad de los miembros son elegidos por los ayuntamientos y la otra mitad por las entidades corporativas y las cooperativas. El procedimiento para tales elecciones es el que establece la instrucción del anterior Gobernador General en funciones de 7 de marzo de 1964.

41. Los diputados representantes de los ayuntamientos son designados por un grupo de compromisarios nombrados con tal fin por los ayuntamientos. Estos eligen a sus representantes en las diputaciones del siguiente modo: En Fernando Poo, su número es de cuatro, de los que uno es designado directamente por la corporación municipal de Santa Isabel y los tres restantes conjuntamente por las de Annobón, San Carlos y San Fernando. En Río Muni el número de diputados es de cinco, de los que uno es designado por el ayuntamiento de Bata y los cuatro restantes conjuntamente por los de Acurenam, Ebebiyín, Evinayong, Micomeseng, Mongomo de Guadalupe, N'sork, Puerto Iradier, Río Benito, Sevilla de Niefang y Valladolid de los Bimbiles.

42. La otra mitad de los diputados, que representan a las entidades corporativas y a las cooperativas se reparte así: en Fernando Poo, dos representantes de las entidades corporativas y dos de las cooperativas; en Río Muni, tres representantes de las entidades corporativas y dos de las cooperativas. Lo mismo que en el caso de los ayuntamientos, las entidades corporativas y cooperativas interesadas designan compromisarios, que proceden a elegir entonces sus candidatos (que también proponen) a representantes en las diputaciones. Las entidades corporativas y las cooperativas que tienen derecho a designar delegados y proponer candidatos son las siguientes:

^b Más detalles en los apéndices II y III.

^d Más detalles en el apéndice IV.

^b No obstante, en algunos municipios en donde no existían todavía entidades corporativas o cooperativas que pudieran elegir los candidatos en la forma expuesta en el párrafo 36 *supra*, los concejales fueron designados directamente por las autoridades. En las elecciones municipales de 1964, 38 de los 58 concejales representantes de las entidades corporativas y de las cooperativas fueron nombrados así.

1. *Entidades corporativas que tienen derecho a nombrar representantes en las diputaciones*

a) *En la Provincia de Fernando Poo*

- i) Caja de Seguros Sociales
- ii) Cámara Oficial Agrícola de Comercio e Industria
- iii) Comisión Administrativa del Puerto de San Carlos
- iv) Comisión Administrativa del Puerto de Santa Isabel
- v) Escuela Normal del Magisterio
- vi) Escuela Superior "Santo Tomás de Aquino"
- vii) Ilustre Colegio de Abogados
- viii) Instituto Nacional de Enseñanza Media

b) *En la Provincia de Río Muni*

- ix) Cámara Oficial Agrícola Forestal de Comercio e Industria
- x) Comisión Administrativa del Puerto de Bata y fondeaderos
- xi) Escuela de Artes y Oficios
- xii) Escuela Normal del Magisterio
- xiii) Ilustre Colegio de Abogados
- xiv) Instituto Nacional de Enseñanza Media
- xv) Sindicato Maderero

2. *Cooperativas que tienen derecho a nombrar representantes en las diputaciones*

a) *En la Provincia de Fernando Poo*

Para Annobón

- i) Cooperativa de San Antonio

Para San Carlos

- ii) - xvii) Cooperativas de Baho Grande, Baho Pequeño, Balachá-Maule, Balombe, Bantabará, Claret de Batete, Bilipá, Bocoricho, Boloco, San Luis de Bombe, Eburu-Ehoco, Musola, Mueri, Rilaja-Oloitia, Ruitche y Ureca

Para Santa Isabel

- xviii) - xxiv) Cooperativas de Baney, Basacato de la Sagrada Familia, Bariobé, Bacaque Pequeño Bacaque Grande, San Luis de Cupapa y Santa Teresa de Bososo
- xxv) Unión Provincial de Cooperativas del Campo
- xxvi) Cooperativa Provincial de Transportes Ligeros

b) *En la Provincia de Río Muni*

Para Bata

- xxvii) Unión Provincial de Cooperativas del Campo

Para Ebebiyín

- xxviii) Cooperativa de San Juan Bautista del Río Nsie
- xxix) Cooperativa de San Jenaro de Oveng

Para Micomeseng

- xxx) Cooperativa de Santiago de Ncomo

Para Valladolid de los Bimbiles

- xxxi) Cooperativa de Medina del Bosque

Justicia

43. El más alto tribunal del Territorio es el Tribunal Superior, que tiene la competencia atribuida por las leyes a las

Audiencias Territoriales y al Tribunal Central del Trabajo. Sus decisiones pueden impugnarse ante el Tribunal Supremo de España. Los nombramientos judiciales son hechos por el Presidente del Gobierno español, oído el Ministerio de Justicia, cuando se trata de candidatos de la metrópoli. Cuando se trata de candidatos indígenas, los nombramientos son hechos por el Comisario General, a propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Guinea Ecuatorial. El Subcomité observó la necesidad de nombrar funcionarios judiciales africanos ya que, hasta el presente, la mayor parte de los nombramientos judiciales han recaído sobre europeos.

C. Condiciones económicas

Información general

44. La economía de la Guinea Ecuatorial se basa principalmente en la agricultura y silvicultura: cacao en Fernando Poo y café y maderas en Río Muni. Otros cultivos, destinados al consumo interno y a la exportación, son la yuca, el aceite y las almendras de palma, el coco y los plátanos. Según se informa, el desarrollo de las pesquerías, aunque con unos comienzos lentos, está progresando rápidamente.

45. El cacao es el más importante de los cultivos principales. Las exportaciones se dirigen fundamentalmente a la metrópoli, en donde gozan de trato preferente. La producción media es de aproximadamente 30.000 toneladas anuales. La producción de café que goza también de trato preferente alcanza una media de 6.000 toneladas anuales.

46. En 1964 había en Río Muni 38 empresas dedicadas a la explotación maderera. Situadas fundamentalmente alrededor de Bata, Río Benito y Cogo, se les habían otorgado concesiones que cubrían aproximadamente 170.000 hectáreas; otras 13.000 hectáreas de la región eran explotadas por empresas más pequeñas. Existen en la región unas 140 especies diferentes de madera, lo que se dice que dificulta la concentración en las que gozan de mayor demanda en los mercados extranjeros. En 1963 la producción fue de 315.581 toneladas y las inversiones a la sazón en maquinaria e instalaciones eran de unos 750 millones de pesetas*.

47. La producción de plátanos llegó a alcanzar la cifra de 14.000 toneladas anuales mientras que la yuca, que solía ser un importante producto de exportación destinado a España, se dedica ahora fundamentalmente al consumo interno, salvo unas 6.000 toneladas que todavía se exportaron a España en 1963.

48. La industria local, en una fase incipiente de desarrollo, se dedica fundamentalmente a la elaboración de alimentos y productos agrícolas, tales como fábricas de aceite y jabón, cacao y subproductos, fábricas de yuca y secaderos de café. También se han montado fábricas de conservas de mariscos. La mayoría de estas industrias locales están situadas en Fernando Poo.

El Plan de Desarrollo Económico y Social

49. El Plan de Desarrollo Económico y Social, concebido como parte del plan total de desarrollo económico y social español, fue preparado por una Comisión especial creada por Orden de la Presidencia del Gobierno español el 5 de mayo de 1962 tras realizar amplios estudios y consultas en el propio Territorio. El Plan abarca el período 1964-1967 y comprende tanto el sector público como el privado aunque, por lo menos inicialmente, se hace hincapié en el sector público para el que se ha trazado un programa detallado de gastos en proyectos económicos y sociales.

50. Al final del cuatrienio a que se refiere el plan, el objetivo es conseguir una tasa de crecimiento anual acumulativa del producto regional bruto del 7,56%. En el siguiente cuadro figuran los resultados previstos en el Plan:

* Las estadísticas que obran en las secciones siguientes, relativas a las condiciones económicas y sociales, se refieren, con escasas excepciones, a los años 1963 y 1964. El Subcomité no ha podido disponer de cifras actuales.

	1962	1964	1967 ^a
	(En millones de pesetas, 1962)		
Producto regional bruto	2.301	2.662	3.311
Bienes y servicios importados	1.151	1.356	1.723
TOTAL de recursos disponibles	3.452	4.018	5.034
Consumo privado	1.450	1.709	2.185
Consumo público	235	291	371
Inversión bruta interna	369	525	761
Bienes y servicios exportados	1.398	1.493	1.717
TOTAL de recursos utilizados	3.452	4.018	5.034

^a Sesenta pesetas equivalen a un dólar de los EE. UU.

51. Cabe señalar que el producto regional bruto se calculó en 1.501,5 millones de pesetas en 1954 y que la tasa media acumulativa de crecimiento anual entre 1954 y 1962, calculado en pesetas de valor constante, fue de 5,5%.

52. Los gastos conforme al Plan de Desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, se calcula en 2.579 millones de pesetas (42.833.333 dólares) para el período del Plan. De esta suma, los gastos públicos se elevarán a 1.651 millones de pesetas (27.366.667 dólares) mientras que los privados se calculan en 928 millones de pesetas (18.466.666 dólares). El total de gastos públicos y privados planeados para cada año del período 1964-1967 es:

	(En millones de pesetas, 1962)
1964	547
1965	607
1966	664
1967	761
TOTAL	2.579

53. Un resumen del programa de gastos públicos, por sectores, para el cuatrienio 1964-1967 es como sigue:

	1964	1965	1966	1967	Total
	(En millones de pesetas, 1962)				
<i>Gastos sociales</i>					
Educación y formación profesional ..	33	37	46	56	142
Sanidad	40	52	61	76	229
Vivienda y ordenación urbana	47	50	53	56	206
<i>Gastos en sectores productivos</i>					
Agricultura	1,7	4,3	4,3	60	11,3
Minería	7,3	6,3	—	—	13,6
Aeropuertos	117,1	108,9	5,4	4,8	236,2
Obras públicas	80,6	100,7	214,4	267,2	662,9
<i>Ayuda estatal a las corporaciones locales</i>	30	30	30	30	120,0
TOTAL de gastos públicos	356,7	389,2	414,1	491,0	1.651,0

54. Se informa que la financiación del programa de gastos públicos del Plan será como sigue:

	1964	1965	1966	1967	Total
	(En millones de pesetas, 1962)				
Presupuesto de la Guinea Ecuatorial....	159,6	200,3	225,7	265,2	850,8
Presupuesto del Estado español	197,1	188,9	188,4	225,8	800,2
TOTAL	356,7	389,2	414,1	491,0	1.651,0

55. Por tanto, los gastos públicos con cargo al presupuesto del Estado español se elevan a 800,2 millones de pesetas, suma que representa el 48,47% de los gastos totales previstos para el cuatrienio 1964-1967.

56. El Plan apunta, fundamentalmente, a las siguientes metas: a) la formación de personal técnico y administrativo indígena, haciendo especial hincapié en las diferentes clases de capacitación técnica o profesional; b) modernización y diver-

sificación de la agricultura, flexibilizando el crédito y mejorando los transportes al objeto de aumentar la competitividad en los mercados internacionales y desarrollar la producción de otros cultivos; c) el desarrollo de las industrias de transformación, en especial las de pescado, allí donde las fábricas de salazón y conservas ofrezcan buenas perspectivas para la exportación; d) la expansión de las instalaciones portuarias, especialmente en Fernando Poo, para atender, entre otras cosas,

a las citadas pesquerías; e) determinar la posibilidad de refinar petróleo de zonas vecinas y también de hacer prospecciones; f) ampliación de las zonas francas de Santa Isabel y San Carlos, con fábricas y almacenes orientados a servir a la costa occidental africana; g) fomento del turismo, especialmente en Santa Isabel pero también en Río Muni, y h) la rápida expansión de los transportes y comunicaciones de los que dependen, en gran medida, los objetivos anteriores.

Presupuesto

57. Según el capítulo IX de la Ley Articulada, promulgada por Decreto 1885/1964 de 3 de julio de 1964, los gastos públicos se sufragan con cargo al presupuesto ordinario de la Guinea Ecuatorial y al Presupuesto de Ayuda y Colaboración del Estado a la Guinea Ecuatorial. Este último consiste principalmente en subvenciones, créditos y ayudas directas e indirectas del Estado español. Incluye gastos previstos en el Plan de Desarrollo y también los correspondientes a administración de justicia, fuerzas armadas, Comisaría General y servicios marítimos y aéreos.

58. Las cifras correspondientes al ejercicio financiero de 1964 indican que los gastos se dividen de la siguiente forma: 422.189.197 pesetas (7.036.485 dólares) correspondientes al presupuesto de Guinea Ecuatorial y 826.413.308 pesetas (13.773.555 dólares) correspondientes al presupuesto del Estado español. Los gastos públicos totales suman 1.248.602.505 pesetas (20.810.040 dólares).

59. A finales de 1964 se calculaba que los gastos públicos para 1965 sumarían 1.053.353 millones de pesetas.

60. Los suplementos de precio para subvencionar el cacao y el café representan la partida de gastos más importante de parte del Gobierno español. Se reconoce que esta situación no es básicamente satisfactoria y por ello el Plan prevé la necesidad de modernizar y racionalizar la producción de café y cacao para hacer que dichos productos puedan competir mejor en los mercados mundiales.

61. No se dispuso de información detallada acerca de las fuentes internas de ingresos. Los derechos de importación sobre bienes de consumo parecen ser, por lo general, bajos, con excepción de los correspondientes a los vinos y licores.

62. Cabe señalar que, según lo dispuesto en el capítulo IX de la Ley Articulada (y la base IV de la Ley de Bases) el presupuesto de la Guinea Ecuatorial está sometido a la aprobación de las Cortes Españolas, en tanto se reciban subvenciones directas o indirectas del Estado español. Así, el proyecto de presupuesto ordinario es formulado por el Consejo de Gobierno sobre un anteproyecto técnico elaborado por la Delegación de Hacienda del Territorio. Aprobado por la Asamblea General antes del 1º de octubre, se remite seguidamente a la Presidencia del Gobierno español que incorpora al mismo las modificaciones necesarias para ajustarlo a las subvenciones que hayan de concederse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda español. Por último, se remite a las Cortes Españolas en la primera quincena de noviembre. Hay que hacer constar también que la legislación fiscal de Guinea Ecuatorial queda igualmente sometida a la aprobación de las Cortes Españolas.

Cooperativas

63. La formación de cooperativas comenzó en 1940 en el Valle de Moka de Fernando Poo con miras a organizar la agricultura. Ulteriormente florecieron fundamentalmente en las zonas de cacaotales de Fernando Poo, donde en 1964 unas treinta cooperativas cosecharon 1.200 toneladas de cacao. La producción total fue, sin embargo, superior a 26.000 toneladas. En Río Muni, las cooperativas están menos desarrolladas. Aunque algunas cifras indican un total de 34 cooperativas*, con 4.232 socios, sólo 26 cooperativas de Fernando Poo y 5 de Río Muni

tienen derecho a elegir representantes, junto con los órganos corporativos, para las diputaciones y ayuntamientos. El Plan de Desarrollo se propone fomentar las cooperativas, especialmente en la zona de Río Muni, donde van a basarse en la producción del café y de otros productos. Desde el año 1964 los créditos a largo plazo destinados al desarrollo del sistema de cooperativas han supuesto unos 73 millones de pesetas.

Vivienda y obras públicas

64. En 1965 el Instituto Nacional de la Vivienda construyó unas 1.500 viviendas a un costo de 301 millones de pesetas. También se inició un programa de construcción de viviendas para maestros. Se ha asignado una suma de 28.012.688 pesetas al Consejo de Gobierno para la construcción de viviendas con destino a los funcionarios del nuevo régimen autónomo.

65. Entre las obras públicas emprendidas por la Oficina de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la administración autónoma figuran el sistema de abastecimiento de agua de Santa Isabel, la autopista que conduce al aeropuerto y el faro marítimo y aéreo de Punta Santiago. También se han iniciado otros proyectos de abastecimiento de agua y de construcción de carreteras, en especial la construcción de la carretera que bordea la costa oriental de la isla y que atraviesa la más rica zona de cacaotales de Fernando Poo.

D. Condiciones sociales y situación de la enseñanza

Sanidad

66. Los principales hospitales son los de Santa Isabel y Bata; hay otros en San Carlos, Puerto Iradier, Río Benito y los nuevos de Concepción y Evinayong. Los dos primeros tienen 350 y 345 camas respectivamente. Se informa que el total de camas es aproximadamente de 1.500. En Mícomeseng, Río Muni, también existe una leprosería que cuenta con 200 camas. El Subcomité observó que los pacientes están distribuidos en los hospitales por tribu y raza.

Mano de obra

67. Se ha señalado que la agricultura, en especial el cultivo de cacao y café, constituye el eje de la economía de la Guinea Ecuatorial. Los agricultores indígenas poseen pequeños predios de unas cuatro hectáreas en los que cultivan cacao y café con destino al mercado. Se trata de explotaciones familiares que no contratan trabajadores. Por otro lado, el cultivo de estos productos al estilo europeo se lleva a cabo empleando sobre todo trabajadores nigerianos, contratados generalmente por tres años, cuyo número ha venido aumentando constantemente. Pese a que los agricultores indígenas se han organizado en cierta medida en cooperativas, se recordará que en 1964 éstas produjeron tan sólo 1.200 toneladas de cacao de un total de 26.000 toneladas.

68. Según se informa, a finales de 1963, el salario medio del trabajador de las plantaciones era de 445 pesetas al mes más 225 pesetas mensuales que se pagaban de una sola vez al terminar el contrato. Se proporciona también alojamiento, comida y atención médica.

69. En el año 1964, de los 37.400 trabajadores empleados por las empresas privadas, 28.000 eran nigerianos, 5.600 indígenas de la Guinea, 800 procedían de otras partes de África y 3.000 eran europeos. Así pues, el 85% de la mano de obra que trabajaba en la empresa privada no era autóctona del Territorio.

70. En 1964, había 3.500 personas empleadas en las empresas y entidades públicas. El 13% de estas personas eran europeas y el 87% indígenas.

71. La legislación laboral en vigor está contenida fundamentalmente en la Orden de 24 de mayo de 1962 que regula los contratos y condiciones de empleo. Se facultó al Servicio de Trabajo para aumentar los salarios mínimos dentro de los límites que marca la ley y existe un Tribunal Central de Trabajo que tiene competencia para conocer de los litigios laborales y resolverlos. Este Tribunal retuvo sus facultades bajo el nuevo régimen, y su personal, al igual que el de los demás tribu-

* Según el Secretario General de la Delegación Nacional de Sindicatos de Madrid, en Fernando Poo hay una cooperativa industrial y 29 cooperativas agrícolas, mientras que en Río Muni hay 2 industriales y 14 agrícolas.

nales, se nombra, en el caso de los funcionarios peninsulares, por la Presidencia del Gobierno Español, oído el Ministro de Justicia, y en el caso de los naturales del Territorio, por el Comisario General, a propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Escuelas

72. El sistema de enseñanza de la Guinea Ecuatorial consiste, fundamentalmente, en tres ciclos: a) cinco años de escuela elemental, obligatoria para todos los niños que viven en un radio de cinco kilómetros de la escuela y hasta la edad de 12 años, aunque se les permite seguir en la misma hasta los 14 años; estos estudios terminan con un certificado de estudios elementales que les permite iniciar los estudios primarios; b) las escuelas primarias, la mayoría de las cuales están situadas en los grandes municipios y ofrecen un plan de dos años para niños de 13 a 14 años, aunque también se les permite continuar en estas escuelas hasta la edad de 15 y 16 años; y c) la enseñanza secundaria que conduce a estudios de nivel universitario fuera del Territorio o a la capacitación técnica o profesional, a la que el régimen concede gran importancia.

73. A fines de 1965 había 135 escuelas elementales y 30 escuelas primarias administradas por las autoridades docentes del Territorio, con una matrícula total de 21.091 alumnos. A fines de 1963 había un total de 15 escuelas primarias. A fines de 1965 se expidieron 1.701 certificados de estudios elementales y 1.105 certificados de enseñanza primaria. En las cifras anteriores no se incluyen las escuelas no oficiales o privadas de esas categorías.

74. Los maestros de enseñanza elemental y primaria se forman en la Escuela Superior Provincial Santo Tomás de Aquino para maestros auxiliares y en las Escuelas Normales de Magisterio de Santa Isabel y Bata creadas en 1963.

75. En lo tocante a la capacitación profesional o técnica hay el Centro Laboral "La Salle", fundado en Bata en 1959 y mantenido por la Diputación de Río Muni, donde se da un diploma de bachillerato laboral de modalidad agrícola y ganadera. Existe también una Escuela de Capacitación Agrícola, dependiente del Servicio Agronómico, una Escuela de Capacitación Sanitaria para formación de enfermeros, y la Escuela Católica de Artes y Oficios de Santa Isabel, subvencionada por el Gobierno, que ofrece enseñanzas de imprenta, sastrería, carpintería, construcción y mecánica. También se han creado en Santa Isabel y Bata escuelas de aprendizaje industrial.

76. En cuanto a la educación superior, se han concedido becas anuales hasta por un valor de 3,5 millones de pesetas para efectuar estudios sobre todo en España. En 1962 había un total de 113 estudiantes becarios y 100 por su cuenta que seguían cursos en las universidades o escuelas técnicas españolas. Las autoridades españolas informaron al Subcomité que, en 1966, había en España 120 estudiantes de la Guinea Ecuatorial. Según la información presentada por los peticionarios, sin embargo, no había más de 92 estudiantes, algunos de ellos con becas.

77. Cabe señalar que, a fines de 1965, entre el personal capacitado indígena que ocupaba puestos importantes en los diferentes servicios figuraba el siguiente: los Jefes de los Servicios de Sanidad y Educación; veintinueve maestros de escuelas primarias; personal de la Inspección de Educación Primaria; ocho inspectores de trabajo; doce jefes del Cuerpo Especial de Policía y un inspector de vivienda y urbanismo.

II. CONVERSACIONES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL

A. *Entrevista con el Director General de Plazas y Provincias Africanas y otros funcionarios del Gobierno español*

78. El Subcomité visitó al General Díaz de Villegas, Director General de Plazas y Provincias Africanas, en la Presidencia del Gobierno el 17 de agosto de 1966.

79. Después de intercambiar las habituales palabras de cortesía, el Director General pasó revista a lo realizado por el Gobierno español en la Guinea Ecuatorial. En otras cosas, declaró que al Territorio no se le planteaba problema de comer-

cialización alguno con respecto a su producción de cacao y de café, pues casi toda la producción era importada por España a precios considerablemente superiores a los precios mundiales corrientes. España compraba el cacao del Territorio a 42 pesetas el kilogramo, en comparación con el precio mundial corriente de 17 pesetas, y el café a 67 pesetas el kilogramo, en contraste con el precio mundial medio de 40 pesetas.

80. Los productores de café y de cacao de la Guinea Ecuatorial podían vender con entera libertad en el mercado internacional, pero de hecho exportaban su producción a España solamente, salvo cuando había excedentes que rebasaban la demanda del mercado español. Convenía que estos productores desarrollaran su comercio con otros mercados, pero no habían mostrado interés alguno al respecto. Sin embargo, no había ningún acuerdo a largo plazo sobre las exportaciones de estos productos a España. Dijo que no debía esperarse ningún aumento importante de la producción agrícola por cuanto los costos de producción eran mayores en el Territorio que en otras partes. Se estaba procediendo a crear nuevas esferas de actividad económica, tal como se había previsto en el Plan de Desarrollo. Este último había sido preparado por el Gobierno español. En caso de que la Guinea Ecuatorial lograra la independencia en un futuro inmediato, el Director General manifestó que no podía predecir hasta qué punto el Gobierno español seguiría prestando asistencia económica al Territorio.

81. En la esfera de la educación, había varias escuelas primarias y de enseñanza profesional, así como dos Escuelas Normales de Magisterio. En el Territorio no había establecimientos de enseñanza superior, pero varias docenas de estudiantes cursaban estudios en las universidades de Barcelona, Pamplona y Madrid con becas. En total, unos 120 estudiantes de la Guinea Ecuatorial cursaban estudios en establecimientos docentes españoles.

82. En cuanto al gobierno del Territorio, el Director General declaró que había un órgano legislativo autónomo. Además, la población del Territorio estaba exenta del servicio militar, en tanto que la fuerza de policía era poco numerosa y estaba formada por indígenas.

83. Sobre la cuestión de la futura evolución constitucional del Territorio, el Director General manifestó, en respuesta a preguntas que se le hicieron, que no se dedicaría a hacer profecías, pues se trataba de un asunto que debía decidir la propia población. Los contactos entre el Consejo de Gobierno del Territorio y el Gobierno español se mantenían a través de un delegado del Consejo en Madrid y no del Comisario General. La población del Territorio tenía libertad para presentar peticiones directamente al Gobierno español o a las autoridades locales. Si la mayoría de la población del Territorio pedía la independencia, el Gobierno español accedería a sus deseos. Toda propuesta encaminada a modificar el régimen constitucional del Territorio requería la mayoría de dos tercios en la Asamblea General, o la mayoría simple de la población al votar en referéndum. El mandato de los actuales órganos gubernativos expiraría en 1968, fecha en la cual su composición tendría que ser renovada. Si la población expresaba su preferencia por elecciones directas, habría que someter esta cuestión a referéndum.

B. *Entrevista con el Secretario Nacional de la Organización Sindical Española y otros dirigentes*

84. El 17 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una entrevista con el Sr. Arturo Espinosa Poveda, Secretario Nacional de la Organización Sindical Española, el Sr. Fuentes Irurozqui, Vicesecretario Nacional de Ordenación Económica y otros funcionarios.

85. El Secretario Nacional informó al Subcomité que la Organización Sindical Española había iniciado la formación de trabajadores de la Guinea Ecuatorial con objeto de capacitarlos para dirigir las instituciones laborales que pudieran establecerse en el futuro. La actividad sindical en el Territorio estaba centrada en la promoción de cooperativas. En Fernando Poo había una cooperativa industrial y 29 cooperativas agrícolas; en Río Muni, las cifras respectivas eran 2 y 14. Estas cooperativas se dedicaban a suministrar ayuda a pe-

queños productores en el mejoramiento de la producción, en la comercialización de las cosechas y en la concesión de créditos. En Fernando Poo, 25 cooperativas con un total de 964 socios tenían a su disposición servicios de crédito por valor de 48 millones de pesetas, en tanto que en Río Muni 11 cooperativas con 2.781 socios tenían 44 millones de pesetas. Estos servicios de crédito consistían en la concesión de préstamos a esas cooperativas por la Organización Sindical Española.

86. Con asistencia de esta última, las cooperativas del Territorio proyectaban ampliar sus actividades a otros campos, entre los cuales figuraban la organización de cursos y seminarios de formación en actividades sindicales, la constitución de asociaciones mixtas de empleadores y de trabajadores, la realización de estudios sobre problemas laborales y el levantamiento de censos de trabajadores y de empresas.

87. Uno de los problemas del Territorio era la falta de mano de obra calificada. Hasta 1963 había cierto descontento motivado por el trato diferente que se daba a los trabajadores locales y a los provenientes de España, debido a que los primeros carecían de la formación profesional necesaria para utilizar maquinaria complicada. En consecuencia, la Organización Sindical Española se había encargado de dar formación profesional a trabajadores calificados, de los cuales unos 70 habían seguido ya los cursos necesarios. La Organización estaba también interesada en ayudar en esferas tales como la negociación colectiva, la seguridad social y el establecimiento de niveles adecuados de empleo.

88. Las actividades de la Organización en relación con la Guinea Ecuatorial sólo habían empezado en años recientes, pero cabía señalar que, pese a haber surgido diversas dificultades en relación con los trabajadores en 1962, no había problemas graves de descontento obrero en el Territorio. En Río Muni había actualmente unos 8.000 trabajadores nigerianos, la mayoría de los cuales no disfrutaban del beneficio de estatuto sindical, y más del doble de esa cifra en Fernando Poo. Era necesario señalar que las actividades de la Organización debían ser enjuiciadas a la luz de la estructura actual de la actividad económica, y que la formación profesional de trabajadores calificados le costaba 40.000 pesetas por trabajador.

89. En respuesta a preguntas hechas, se informó al Subcomité que la Organización Sindical no había capacitado a ingenieros indígenas. Había varios estudiantes que seguían cursos profesionales y de otro tipo en establecimientos tales como la Universidad de Barcelona, pero no se podían suministrar cifras inmediatamente. Si las Naciones Unidas concedieran asistencia técnica al Territorio, la esfera más adecuada sería la formación profesional de trabajadores calificados. Como la mayor parte de las necesidades de mano de obra del Territorio eran satisfechas con mano de obra importada, especialmente de Nigeria, surgiría el problema de si aquella formación debería darse localmente a los trabajadores importados, o a un número seleccionado de trabajadores indígenas e instituciones situadas en el extranjero.

90. En cuanto a la tenencia de la tierra, no había diferencia alguna en las condiciones otorgadas a los habitantes de origen español y a la población indígena. Los agricultores que eran socios de cooperativas tenían derecho a recibir préstamos en las mismas condiciones que los propietarios españoles, siendo el tipo de interés de un 3,5%. Las condiciones de trabajo y los salarios eran fijados según normas establecidas por el Gobierno. De hecho, estas normas eran de naturaleza tal que se habían hecho peticiones para restringir la importación de mano de obra, ya que los trabajadores nigerianos en particular expresaban a menudo su deseo de quedarse indefinidamente en el Territorio. La participación de los propios trabajadores en la determinación de las condiciones en el trabajo era limitada, pero se estaban haciendo esfuerzos por educar a los trabajadores a fin de capacitarlos para que participaran más eficazmente en esta esfera, especialmente en materia de negociación colectiva.

C. Entrevistas con el Subcomisario del Plan de Desarrollo Económico y Social y otros funcionarios españoles

91. El 17 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una reunión con el Sr. Tomás Allende, Subcomisario del Plan de De-

sarrollo Económico y Social, el Sr. Juan Alvarez Corugedo, Secretario de la Comisión para el Desarrollo Económico de Fernando Poo y Río Muni, y otros funcionarios.

92. Se informó al Subcomité que el Plan General de Desarrollo Económico y Social para 1964-1967 incluía una sección relativa a la Guinea Ecuatorial, elaborada por una Comisión en la que figuraban participantes del Territorio. En dicha sección, que había obtenido la aprobación de la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial, se preveía el desarrollo de la región mediante inversiones y gastos públicos, a cargo de España y del Territorio conjuntamente, y de la empresa privada. Los órganos de gobierno del Territorio tenían libertad para elaborar su propio plan para el futuro, pero, por el momento, la política económica estaba basada en el presente plan, cuya finalidad era poner al Territorio en condiciones de hacer frente a la competencia internacional y de determinar su propio futuro económico al final del plan.

93. En el plan se preveía un aumento anual del ingreso per cápita del 7,56% en el Territorio, comparado con el 6% para España. La consecución de este objetivo entrañaría un aumento del ingreso anual per cápita en la Guinea Ecuatorial de 132 dólares en 1963 a 170 en 1967. Para tal fin se requerirían inversiones públicas por valor de 1.651 millones de pesetas durante el cuatrienio del plan, además de 982 millones de pesetas de inversiones privadas. De las inversiones públicas necesarias, se esperaba que 850 millones de pesetas, destinados a educación, sanidad y comunicaciones, procederían del Territorio mismo, y el resto del Gobierno español, incluidos los gastos del aeropuerto de Santa Isabel y de ordenación urbana y construcción de viviendas.

94. Debido al aumento del consumo público, la realización efectiva de las inversiones públicas a cargo del Territorio había sido inferior en un 20% al objetivo fijado. Sin embargo, se había mantenido la tasa prevista de aumento del ingreso per cápita. En cambio, las inversiones planeadas por el Gobierno español en el aeropuerto de Santa Isabel habían sufrido una ligera alteración debido a la demora en la terminación de los planes de construcción.

95. En el sector privado era preciso advertir que el Territorio exportaba a España toda su producción de café y de cacao, los productos más importantes junto con la madera, a precios superiores a los vigentes en el mercado internacional. Estos suplementos de precios concedidos por España para el café y el cacao representaban unos 700 millones de pesetas por año. Sin embargo, el mercado español era incapaz de absorber cantidades de café y de cacao superiores a la producción actual del Territorio, razón por la cual los productores de estos productos saldrían perdiendo si vendiesen cualesquiera excedentes en el mercado internacional.

96. En consecuencia, en el plan se preveía aumentar el cultivo de plátanos, yuca y piña en vez de ampliar la producción de cacao y de café. En el plan se recomendaba también el desarrollo de la ganadería, la pesca y las industrias basadas en productos agrícolas. Las posibilidades de desarrollo de la industria pesada eran limitadas a causa de la falta de producción de minerales, pero iban a emprenderse estudios geológicos. A fin de alentar la actividad en las mencionadas esferas, el plan contenía disposiciones relativas a exenciones fiscales y a la concesión de crédito a bajos tipos de interés.

97. Como resultado de estos incentivos, en Fernando Poo se había establecido una plantación de plátanos, se estaba construyendo una fábrica de conservas de pescado y se edificaría una planta de elaboración de cacao. En Río Muni se preveía que una fábrica de aceite de palma iniciaría en breve sus actividades, y además se estaba construyendo una fábrica de conservas de pescado.

98. En respuesta a preguntas hechas, los funcionarios declararon que como la Guinea Ecuatorial no era autosuficiente en cuanto a mano de obra calificada, en el plan se había previsto proporcionar formación profesional, la cual era de primera necesidad para el Territorio. Había oportunidades de formación profesional en escuelas agrícolas e industriales en las cuales se graduaban anualmente alrededor de 100 personas. Con respecto a la educación ordinaria, los funcionarios declararon que

la población escolar, que era de 34.000 alumnos en 1947, había aumentado a 40.000 alumnos en 1966. El plan contenía objetivos concretos en este sector y también en el de la sanidad.

99. Sobre la cuestión de los incentivos a los productores, los funcionarios explicaron que la concesión de exenciones fiscales y de crédito en condiciones favorables estaba limitada a las actividades que eran de mayor utilidad para el Territorio, con exclusión, por ejemplo, del cacao y del café, productos que se encontraban expuestos a superproducción y a condiciones desfavorables en el mercado mundial. Los funcionarios negaron que esta política pudiera alentar la formación de monopolios por cuanto había disposiciones reglamentarias que los prohibían. Las empresas extranjeras tenían libertad para reinvertir sus beneficios en el Territorio o exportarlos. Sin embargo, esas empresas solían reinvertir sus beneficios en el Territorio, y se esperaba que tal política continuase.

100. Los funcionarios declararon además que, con miras a asegurar la futura viabilidad económica del Territorio, el Gobierno español se abstenía de fomentar actividades económicas que necesitaran ser subvencionadas. No obstante, el Gobierno español seguiría concediendo las subvenciones que había estado pagando hasta ahora incluso después de que el Territorio hubiera obtenido la independencia.

101. Explicando las cifras que habían dado anteriormente, los funcionarios manifestaron que el ingreso per cápita estaba calculado a base de la población total del Territorio. El ingreso de la población de origen español no planteaba problemas a este respecto por ser reducido el número de residentes españoles; en efecto, sólo había 4.000 en Fernando Poo y 2.500 en Río Muni. Como resultado de los proyectos de desarrollo en curso de ejecución, se habían creado gran número de empleos para la población indígena.

D. Entrevista con el Subsecretario de Trabajo y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo

102. El 18 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una reunión con el Sr. Antonio Ibáñez Freire, Subsecretario de Trabajo, y con otros funcionarios del Ministerio de Trabajo. En sus observaciones preliminares, mencionaron que el Gobierno español había adoptado importantes medidas económicas y sociales en la Guinea Ecuatorial que habían permitido alcanzar grandes progresos en esferas tales como la sanidad y la educación. En efecto, en la esfera de la sanidad, el número de médicos en relación con la población, a saber, un médico por cada 3.500 habitantes en Fernando Poo y uno por cada 9.600 en Río Muni, era muy superior al existente en muchos otros países independientes de África.

103. En cuanto a las actividades del Ministerio de Trabajo relacionadas con la Guinea Ecuatorial, los funcionarios declararon que se ocupaba de cuestiones laborales y de seguridad social y, en particular, de la aplicación de las disposiciones laborales y de la capacitación de inspectores de trabajo indígenas que supervisarán su aplicación. La segunda función principal del Ministerio se desarrollaba en la esfera de la asistencia a las cooperativas del Territorio. Los sindicatos españoles se ocupaban de la administración de dicha asistencia, en tanto que el Ministerio se encargaba de suministrar los fondos. En los últimos dos años, el Ministerio había gastado 90 millones de pesetas en esta labor. La tercera función principal del Ministerio consistía en proporcionar capacitación profesional a trabajadores adultos mediante la formación en el empleo y cursos a tiempo completo. A este respecto, los funcionarios españoles señalaron a la atención del Subcomité la asistencia del Centro Número 1 de Formación Profesional Acelerada en la cual, entre otros, trabajadores del Territorio de 18 a 41 años de edad seguían cursos de seis meses para capacitarse como trabajadores metalúrgicos o de la construcción, mecánicos y electricistas. En España había 10 escuelas de ese tipo administradas por la Organización Sindical. Se preveía que el Ministerio ampliaría sus actividades en este campo al Territorio.

E. Entrevistas con el Comisario General y otros funcionarios

104. El 20 de agosto de 1966, el Subcomité visitó al Comisario General del Territorio, Sr. Suances Díaz del Río, en San-

ta Isabel. El Comisario General dio seguridades al Subcomité de que tendría libertad para entrevistar a las personas que deseara y que podría contar con su plena cooperación. Personalmente estaba a disposición del Subcomité si éste deseaba tener conversaciones con él.

105. El 22 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una nueva reunión en Bata con el Comisario General. También estuvieron presentes el Sr. Jaime de Piniés, Representante Permanente Adjunto de España en las Naciones Unidas, el Sr. Gabriel Mañueco, Director General de África y Mundo Árabe del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, y otros funcionarios.

106. En esta reunión, el Comisario General informó al Subcomité que el Gobierno español se proponía conceder la independencia a la Guinea Ecuatorial, por cuanto aceptaba la independencia soberana como fase final de la evolución contemporánea de los territorios dependientes. Animado de este espíritu, el Gobierno español había concedido la autonomía al Territorio como etapa preparatoria para la independencia en condiciones de estabilidad y viabilidad.

107. España no tenía intereses económicos en el Territorio, como lo demostraba el hecho de que subvencionaba y adquiría la mayor parte de la producción de la Guinea Ecuatorial destinada a la exportación. El único interés de España en el Territorio hoy día era espiritual; circunstancias históricas habían forjado vínculos sociales, culturales y de otra índole entre los dos países y sus pueblos. El Gobierno español estaba también interesado en proteger al Territorio contra posibles miras expansionistas o neocolonialistas desde el exterior y contra el peligro de explotación por intereses económicos extranjeros sin escrúpulos. Teniendo presentes estas consideraciones, el Gobierno español estaba dispuesto a conceder la independencia al Territorio cuando su población lo solicitara. La libertad con que las personas entrevistadas habían hablado al Subcomité era en sí misma testimonio de la buena fe del Gobierno español a este respecto.

108. En respuesta a preguntas que se le hicieron, el Comisario General manifestó que, por haber tomado posesión de su cargo hacía pocos días solamente, no tenía noticia de que la Asamblea General hubiese adoptado una supuesta moción en la cual se pedía oficialmente la independencia. Según sus datos, había habido algún debate sobre la cuestión, pero que no se había llegado a un acuerdo. Prometió investigar el asunto y transmitir la información necesaria. Refiriéndose a otra moción recientemente adoptada por la Asamblea General en la que ésta expresaba su falta de confianza en el Consejo de Gobierno, el Comisario General declaró que no la había transmitido al Gobierno español. Como poco tiempo antes la misma Asamblea General había aprobado otra moción felicitando al Consejo de Gobierno por su actuación, había creído oportuno solicitar a la Asamblea que volviera a examinar su moción de no confianza.

109. Esbozando la reciente evolución constitucional del Territorio, el Comisario General recordó que en el referéndum de diciembre de 1963 se había preguntado a la población si era o no favorable a la autonomía. En el referéndum participaron todos los habitantes indígenas mayores de 21 años, así como todos los habitantes de origen español que habían residido en el Territorio durante dos años como mínimo. La demás población no indígena no tuvo derecho a participar en el referéndum. Después del resultado afirmativo del referéndum, se habían celebrado elecciones a concejales y a diputados provinciales, y posteriormente se había instituido el Consejo de Gobierno.

110. Como explicación del sistema electoral, los funcionarios que acompañaban al Comisario General declararon que cada ayuntamiento estaba compuesto de un número igual de concejales elegidos por los cabezas de familia residentes en la circunscripción y de concejales elegidos por las cooperativas locales y las entidades corporativas; estas últimas estaban formadas por diversos grupos profesionales, culturales y económicos, entre los cuales figuran las cámaras de comercio locales y las asociaciones de médicos, farmacéuticos, abogados, ingenieros y maestros. En las zonas en que no había entidades cor-

porativas, los puestos vacantes reservados a dichas entidades en la corporación municipal solían cubrirse con personas designadas por el Gobernador Civil. Según recordaban los funcionarios, con arreglo a este criterio se habían cubierto unas 22 vacantes en los ayuntamientos. Los concejales así designados eran normalmente personas que no habían conseguido ganar por estrecho margen uno de los puestos electivos en la corporación respectiva.

111. Los funcionarios recordaron que la Diputación Provincial de Río Muni comprendía diez diputados y ocho la de Fernando Poo. La Asamblea General estaba constituida por la reunión conjunta de estas dos Diputaciones. Cada una de ellas se componía de un número igual de miembros elegidos por representantes de los ayuntamientos y de miembros elegidos por las entidades corporativas y las cooperativas. Había dos diputados de origen español en la Diputación Provincial de Río Muni y uno en la de Fernando Poo.

112. Con respecto a los partidos políticos, el Comisario General declaró que antes del establecimiento del régimen autónomo se habían fijado ciertas restricciones a la actividad política en el Territorio. Posteriormente, sin embargo, los partidos políticos habían tenido libertad para llevar a cabo sus actividades, aunque no existía disposición alguna que previera su reconocimiento oficial. La autorización del Gobernador Civil, responsable ante el Comisario General a este respecto, era necesaria para la celebración de reuniones políticas públicas; la norma era conceder tal autorización. Aparte del Movimiento de Unificación Nacional de la Guinea Ecuatorial (MUNGE) y del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE), que tenían su sede en el Territorio, existía la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE), partido que se veía obstaculizado por falta de organización y de apoyo financiero y que había decidido recientemente fusionarse con el MUNGE. Últimamente, la actividad política había aumentado durante el período anterior a la visita del Subcomité.

113. En cuanto a la sugerencia hecha en algunos medios con vistas a la separación de Fernando Poo y Río Muni, el Comisario General declaró que el Gobierno español estaba estudiando cuidadosamente esta cuestión. Se trataba de un acontecimiento reciente. Sobre el problema de la independencia, el Comisario General manifestó que al Territorio le resultaría difícil mantenerse económicamente sin el apoyo de España. La independencia política no era imposible si existía tal apoyo. No obstante, sería difícil predecir cuándo el Territorio estaría preparado para la independencia a menos que los habitantes llegaran entre sí a un acuerdo sobre este punto. Con respecto al sistema electoral, tenía la impresión de que la mayoría de la población estaba en favor de la aplicación del sufragio universal de los adultos en el futuro, pero que no había entusiasmo alguno por hacer extensivo ese sufragio a las mujeres.

114. A su regreso a Nueva York, el Subcomité recibió una comunicación del Representante Permanente de España en las Naciones Unidas en la cual éste declaraba, en nombre del Comisario General y como respuesta a la pregunta hecha anteriormente por el Subcomité al Comisario, que, examinados los archivos, no se había encontrado información alguna relativa a la presentación al Gobierno de España de una petición formal de independencia por la administración autónoma. Aunque en cierta ocasión una propuesta concreta de esta naturaleza fue discutida en el Consejo de Gobierno, sólo obtuvo un voto favorable y fue por tanto rechazada.

F. Entrevista con el Gobernador Civil de Río Muni

115. El 23 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una reunión con el Gobernador Civil de Río Muni, Sr. Simon Ngomo Ndumu Asumu. Durante la misma, el Gobernador Civil informó al Subcomité que, a juicio suyo, debería concederse la independencia a la Guinea Ecuatorial, pero que el Territorio no estaba todavía preparado para ello en cuanto a las exigencias en materia de organización. Las razones de esta situación eran el reducido número de habitantes y la división del movimiento nacionalista en tres grupos: el MUNGE, el MONALIGE y la IPGE.

116. Personalmente, había pertenecido a todos estos grupos, empezando por el MONALIGE, cuyos primeros dirigentes eran naturales de Río Muni residentes en Fernando Poo. Posteriormente, se había afiliado a la IPGE, que tuvo primero su sede en Río Muni. Pero la IPGE había adoptado un programa que incluía un proyecto de fusión del Territorio con el Camerún, proyecto que había resultado inaceptable para él y para gran número de partidarios de la IPGE. Posteriormente, sus dirigentes se habían exiliado, en parte a causa de las limitaciones impuestas a su actividad por el Gobierno. En un esfuerzo por establecer un solo movimiento político unificado, el 30 de noviembre de 1963 se había constituido el MUNGE después de la celebración de una conferencia en la que habían participado representantes de todos los sectores de la población, inclusive los alcaldes. Manifestó que simpatizaba con los objetivos de este partido, particularmente en lo relativo a la cuestión de la independencia. El hecho de que continuaran existiendo los demás partidos políticos obedecía en parte a su descontento por la distribución de los puestos oficiales hecha después de las elecciones.

117. En cuanto a la fuerza relativa de los diferentes partidos, el Gobernador Civil manifestó que por los documentos disponibles y habida cuenta de la alianza existente entre el MUNGE y la IPGE, podía afirmarse que el MUNGE tenía el mayor número de socios; sin embargo, su impresión personal era que el MONALIGE contaba con un número mayor de adeptos entre la población, especialmente en Río Muni. En Fernando Poo, la fuerza relativa de ambos partidos era aproximadamente la misma. La alianza entre la IPGE y el MUNGE había empezado a funcionar en Río Muni, pero no en Fernando Poo, donde todavía se estaban celebrando conversaciones. Ni el MUNGE ni el MONALIGE estaban completamente satisfechos con la actuación del actual Consejo de Gobierno, y deseaban subsanar las fallas del sistema vigente.

118. Con respecto al sistema electoral en vigor, el Gobernador Civil no creía que fuera inadecuado para las necesidades del Territorio después de la independencia, si se consideraba que la estructura del Gobierno con posterioridad a la misma sería diferente de la administración autónoma. Por razón de su cargo, no podía criticar a la Asamblea General, formada por los representantes legítimos de la población, pero personalmente consideraba que se podía modificar el sistema con objeto de dar al Presidente del Consejo de Gobierno más voz y voto en la designación de los miembros del Consejo, con los cuales tenía que trabajar en equipo.

119. Explicando sus puntos de vista sobre la cuestión de la independencia, el Gobernador Civil declaró que, al hablar de las exigencias en materia de organización para la independencia, pensaba en la importancia de coordinar y armonizar las ideas, objetivos y esfuerzos de la población tocantes a la independencia. Actualmente, faltaba el diálogo entre los partidos políticos sobre las medidas que habían de adoptarse para la consecución de la independencia. Todos los partidos la deseaban, pero cada uno de ellos se consideraba como el grupo que contaba en sus filas con los verdaderos y legítimos dirigentes de la población.

120. Sobre el sistema de nombramiento de los gobernadores civiles, declaró que eran seleccionados por el Gobierno español de una terna presentada por el Consejo de Gobierno al Comisario General. La decisión del Gobierno español solía estar determinada por el número de votos recibidos por cada candidato en el Consejo de Gobierno.

III. CONSULTAS CON LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO

A. Entrevista con el Presidente de la Asamblea

121. El 19 de agosto de 1966, día de su llegada, el Subcomité hizo una visita al Presidente de la Asamblea General, Sr. Enrique Gori Molubela. Asistieron a la reunión algunos otros miembros de la Asamblea.

122. En una declaración de bienvenida, el Sr. Gori Molubela informó al Subcomité que la totalidad del pueblo de Guinea Ecuatorial deseaba que el Territorio obtuviese la independencia. El problema residía en cómo y cuándo. Por su parte,

el Sr. Gori Molubela abrigaba la esperanza de que no se producirían demoras indebidas. A continuación hizo una breve reseña histórica del Territorio, señalando en particular que la población autóctona de Fernando Poo estaba constituida por los bubis, cuyo número ascendía a 40.000 en el año 1900, pero que actualmente sólo era de 18.000. La afluencia de colonos de Nigeria y Sierra Leona era reciente; el número de nigerianos era aproximadamente de 32.000. Añadió que el grupo étnico fundamental de Río Muni estaba formado por los fangs, que también se encontraban en el Camerún y el Gabón.

123. Refiriéndose a la intensificación de las actividades políticas en el Territorio, el Sr. Gori Molubela mencionó que había participado personalmente en las iniciativas encaminadas al diálogo con el Gobierno de España que tuvo por resultado la concesión de la autonomía a la Guinea Ecuatorial. Así, en 1961 había participado en la fundación del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE).

124. También señaló que la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE) había sido fundada en 1963 por un camru-nés. La IPGE, que tiene su base en Río Muni, había pedido en su manifiesto la autonomía y la independencia con objeto de establecer una federación con el Camerún. El Sr. Gori Molubela abrigaba temores en cuanto al porvenir de Fernando Poo en el caso de que la federación con el Camerún llegara a concretarse. Por consiguiente, era comprensible que estuviesen ganando terreno las propuestas de separar a Fernando Poo de Río Muni. A este respecto, recordó que el 29 de abril de 1965 la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial había aprobado por unanimidad una moción en la que se pedía que, antes de expirar el mandato de la presente administración, se revisaran las relaciones entre las dos partes del Territorio. En la actualidad la IPGE estaba desgarrada por divisiones, pero no había renunciado a sus aspiraciones de formar una federación con el Camerún. Tal como estaba entonces la situación, los bubis deseaban que Fernando Poo se separase de Río Muni.

125. El Sr. Gori Molubela señaló además un documento preparado por él, en el que dijo había tratado de presentar, para información del Comité, una visión objetiva de la situación política concorde con su condición de Concejal del Ayuntamiento de Santa Isabel, Presidente de la Diputación de Fernando Poo y Presidente de la Asamblea General de la Guinea Ecuatorial. En dicho documento afirmaba que las características fundamentales del Territorio eran su reducida extensión, la diversidad y peculiaridad de los aspectos económicos, humanos y culturales de cada una de las dos provincias, la falta de contigüidad geográfica y las diferencias de sus respectivas composiciones étnicas.

126. Se afirmaba también en dicho documento que el sistema unitario de gobierno había creado entre Fernando Poo y Río Muni una tensión que se hallaba acentuada por la hegemonía del segundo en la composición del Gobierno. En el sector económico la situación había conducido a un retraimiento de la iniciativa privada, la cual consideraba la autonomía como un régimen político transitorio de gran incertidumbre para las inversiones de capital.

127. Según el documento, el derecho del pueblo a la libre determinación no quedaba agotado por su aceptación del sistema autónomo en diciembre de 1963. Prueba de ello era que la Asamblea General y el Consejo de Gobierno estuviesen tratando dos temas que presuponian la existencia de ese derecho: el primero era la revisión de la Ley Articulada sobre el régimen autónomo y el segundo era la separación de Fernando Poo y Río Muni.

128. En todo examen de la cronología de la independencia debían tenerse en cuenta varios factores, entre ellos, la superficie y población reducidas de la Guinea Ecuatorial, el hecho de que la situación económica del Territorio se debía en gran medida al trato preferente dado a sus productos en el mercado español, y la posibilidad de anexión por parte de Estados vecinos con ingresos más bajos.

129. En cuanto a las tendencias políticas vigentes, en el documento presentado por el Sr. Gori Molubela se afirmaba que, en líneas generales y salvo excepciones concretas, el sistema

unitario de gobierno era aceptado por la población de Río Muni, en tanto que la postura contraria era defendida con variedad de matices por la población de Fernando Poo. Esta consideraba que la unificación era una ficción contraria a la realidad geográfica, humana y cultural de las dos partes del Territorio, que no tenían historia común salvo en lo tocante a la colonización española. Además, el presente sistema de gobierno constituía, de hecho, una limitación del derecho a la libre determinación de la población autóctona de Fernando Poo. Ese sistema traía consigo la preeminencia de Río Muni, que gozaba de mayoría en la Asamblea y en el Consejo de Gobierno. Además, Río Muni absorbía las dos terceras partes de los gastos públicos mientras sólo aportaba una tercera a los ingresos.

130. En lo tocante al movimiento pro independencia, se declaraba en el documento que, si bien parte de la población del Territorio se inclinaba a favor de la independencia, no había consenso alguno al respecto. Existía apoyo popular — especialmente en Fernando Poo — para la idea de vinculación al Estado español, después de la independencia, a base de convenios de defensa exterior y de ayuda económica y técnica. En el norte de Río Muni predominaba una intensa opinión a favor de la vinculación con el Camerún, mientras que en la parte sur la población se inclinaba a favor de la vinculación con el Gabón. Sin embargo, el grado de vinculación deseada variaba desde la mera relación hasta la federación.

131. Además, en el documento presentado por el Sr. Gori Molubela se decía que los partidos políticos hicieron su aparición en el Territorio durante la etapa anterior al régimen de autonomía y que tenían por finalidad casi exclusiva poner fin al dominio colonial. Esos partidos eran la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE), de tendencia federativa con el Camerún, el Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE) y el Movimiento de Unificación de la Guinea Ecuatorial (MUNGE). Según el documento, las actividades de esos partidos habían ido en disminución desde que se introdujo el sistema en vigencia, que había absorbido muchas de sus actividades. En otro documento en el que se presentaba una lista de los miembros de la Asamblea General, el Sr. Gori Molubela informó al Subcomité que, de los dieciocho miembros de ese órgano, siete habían sido elegidos originalmente a los concejos municipales por los cabezas de familia y el resto representaba a las sociedades de capital y las cooperativas.

132. Para concluir, el Sr. Gori Molubela señaló a la atención un discurso que había pronunciado el 3 de enero de 1966 en relación con el principio de la libre determinación para el pueblo de Fernando Poo. En dicho discurso había expresado la determinación del pueblo de no permitir la interferencia de ningún país en su estatuto político. El pueblo sabía que ciertos países estaban sencillamente aguardando el retiro de la presencia española para apoderarse de Fernando Poo. El pueblo deseaba que cualquier modificación de su estatuto político, en ejercicio de su legítimo derecho a la libre determinación, sólo fuese realizada en diálogo directo entre sus auténticos representantes y el Gobierno de España. A este respecto, recordaba la promesa recientemente hecha por el Jefe del Estado de que España defendería las libertades y la voluntad de libre decisión del pueblo y lo defendería frente a cualquiera del exterior que pretendiese comprometer su futuro.

B. Reuniones con miembros del Consejo de Gobierno

133. El 19 de agosto de 1966, el Subcomité visitó al señor Bonifacio Ondó Edú, Presidente del Consejo de Gobierno, y a los siguientes miembros del Consejo: Sr. Francisco Macías Nguema, Vicepresidente, Sr. Aurelio Nicolás Itoha, Sr. Gustavo Watson Bueko, Sr. Luis Maho Sicacha, Sr. Román Borico Toichoa, Sr. Antonio Cándido Nang y Sr. Rafael Nsue Nchama. Luego de un cambio de saludos, se celebró un debate que condujo a una revisión del programa propuesto por el Consejo de Gobierno para las actividades del Subcomité.

134. El 20 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión de fondo con los miembros del Consejo de Gobierno. A continuación se resumen las declaraciones hechas por ellos, in-

cluidas sus respuestas a las preguntas formuladas por miembros del Subcomité.

135. Al abrir el debate, el Sr. Ondó Edú, afiliado al MUNGE en 1964, señaló que el pueblo de la Guinea Ecuatorial, al igual que los de otros territorios dependientes, anhelaba la independencia. En cuanto a la independencia, manifestó que al Territorio se le había concedido la autonomía sin preparación adecuada. A su juicio, debía fijarse la fecha para la iniciación de negociaciones tendientes a establecer las disposiciones previas necesarias a la independencia. Volvería a ocuparse en mayor detalle de estas opiniones, una vez que sus colegas hubiesen expresado las suyas. También señaló que a fines de 1967 se celebrarían elecciones para establecer un nuevo Consejo de Gobierno a partir del 15 de julio de 1968, fecha en que expiraría el mandato del actual Consejo.

136. El Sr. Luis Maho Sicacha (Consejero de Información y Turismo), afiliado al MONALIGE en 1964, declaró que era necesario mejorar el funcionamiento del régimen actual. Tales mejoras constituirían, de por sí, la preparación a la independencia. El Territorio se enfrentaba con varios problemas internos apremiantes que debían resolverse antes de la independencia.

137. El Sr. Aurelio Nicolás Itoha (Consejero de Trabajo), afiliado al MUNGE en 1964, informó al Subcomité que durante las conversaciones que habían conducido a la concesión de la autonomía, los participantes de la Guinea Ecuatorial se habían abstenido de pedir que se definiese la duración de dicha autonomía, y habían acordado que la fecha de la independencia sólo debía discutirse una vez que el pueblo del Territorio estuviese preparado para la misma. Cuando llegase ese momento, el Gobierno del Territorio pediría la independencia teniendo presentes las seguridades que le había dado el Gobierno de España de que no interpondría ningún obstáculo a tal petición. En consecuencia, por el momento no era necesario fijar una fecha.

138. El Sr. Román Borico Toichoa (Consejero de Industria y Minería), afiliado al MUNGE en 1964, hizo suyas las opiniones expresadas por el Sr. Nicolás Itoha. La fijación de la fecha para la independencia sólo debía ser examinada cuando el Territorio estuviese preparado para ella. A su juicio, la Guinea Ecuatorial todavía no tenía la preparación adecuada.

139. El Sr. Francisco Macías Nguema (Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Planificación Urbana), afiliado al MONALIGE en 1964, declaró que el pueblo del Territorio deseaba ser dueño de su propio destino. La falta de preparación no podía ni debía ser una razón valedera para aplazar la independencia y, en su opinión, debía fijarse inmediatamente una fecha para ella. Esto podía hacerse mediante conversaciones con el Gobierno de España. El pueblo no tenía la intención de cortar las relaciones con España al obtener la independencia; por el contrario, deseaba mantener relaciones análogas a las existentes entre los países del Commonwealth y el Reino Unido. La independencia, que debía adquirirse por medios pacíficos, permitiría que la Guinea Ecuatorial ocupase el lugar que le correspondía en la comunidad internacional y en el mundo de habla española. Si bien podía decirse que el Territorio no era suficientemente viable desde el punto de vista económico, era preciso recordar que ningún país había iniciado su existencia independiente en condiciones económicas satisfactorias.

140. Para concluir, el Sr. Macías Nguema pidió que se fijase sin demora una fecha para la independencia, de manera que pudiera ponerse fin, pacíficamente y sin violencia, a la etapa colonial. Sugirió que el 15 de julio de 1967 sería una fecha adecuada, ya que daría el tiempo necesario para celebrar negociaciones y redactar una constitución que se armonizara con las aspiraciones del pueblo, las cuales, en su opinión, debían determinarse mediante un plebiscito. Refiriéndose a ciertos sectores de la población, que pedían la separación de Fernando Poo y Río Muni, declaró que esta cuestión debía ser decidida por la totalidad del pueblo. Sin embargo, recordó que el ejemplo de otros países había demostrado que ese problema podría resolverse; cabía esperar que se planteasen problemas de esta

índole cuando las distintas regiones de un país se encontraban en diferentes etapas de desarrollo económico. Tal vez la solución residiese en algún tipo de relación federal.

141. El Sr. Rafael Nsue Nchama (Consejero de Agricultura), afiliado al MUNGE en 1964, declaró que, a su juicio, debía fijarse una fecha próxima para la independencia del Territorio. Su opinión era compartida por el sector que representaba. Consideraba que convenía escoger el 15 de julio de 1968, fecha en que debía expirar el mandato del presente Consejo de Gobierno.

142. El Sr. Gustavo Watson Bueko (Consejero de Sanidad y Bienestar), afiliado al MUNGE en 1964, señaló que en la propia Ley de Bases se concebía el Territorio como integrado por dos partes diferentes. El pueblo de Fernando Poo había alcanzado un nivel de desarrollo económico, social y educativo más elevado que el de Río Muni. Reconociendo estas diferencias, el 12 de agosto de 1966 los Sres. Maho Sicacha, Borico Toichoa y Nicolás Itoha y el propio orador habían presentado una moción en el Consejo de Gobierno para pedir la separación económica y administrativa de Fernando Poo y Río Muni. El 13 de agosto de 1966, después de una votación, el Consejo de Gobierno había acordado someter la moción a examen de la Asamblea General. La Asamblea todavía no la había examinado. En cuanto a la independencia, el Sr. Bueko estimaba que por el momento sería inapropiado y prematuro fijar una fecha, y que esta cuestión debía ser objeto de negociaciones que debían iniciarse sin demora. Además, encareció al Subcomité que determinase los verdaderos deseos de la mayoría de la población y no los de una mayoría imaginaria que vivía en las zonas urbanas y cuya opinión no era representativa.

143. El Sr. Antonino Cándido Nang (Consejero de Educación), afiliado al MONALIGE en 1964, recordó que el Gobierno de España se había comprometido a conceder la independencia cuando la población la pidiese. En esta inteligencia se celebraron las elecciones por las que se estableció el Gobierno autónomo. El Sr. Antonio Cándido Nang observó que todas las demostraciones del día anterior eran a favor de que se concediera pronto la independencia. El Consejo del Gobierno tenía el deber de reflejar las opiniones de los electores. La independencia era un preludio necesario para consolidar la libertad del pueblo y para cualquier decisión de éste en cuanto a la forma de gobierno más adecuada a sus necesidades y aspiraciones.

144. En otra declaración el Sr. Maho Sicacha recordó que se contaba entre los iniciadores de la lucha por la independencia y que había comparecido ante algunos órganos de las Naciones Unidas para declarar a ese respecto. En su opinión, la Comisaría General debía fijar una fecha para iniciar negociaciones en las que se estudiaría la posibilidad de separación económica y administrativamente a Fernando Poo de Río Muni y de establecer después una relación federal. En esas negociaciones se debería tratar también de la fecha de la independencia.

145. Para terminar el debate, el Sr. Ondó Edú informó al Subcomité que en 1962 su lucha por la causa de la independencia le había llevado al exilio y de que había comparecido ante las Naciones Unidas para pedir la concesión de la autonomía y la independencia. Sin embargo, se veía obligado a decir que en el actual período de autonomía no se había encontrado aún la solución política de los problemas del Territorio, que debían resolverse antes de la independencia. En vista de la reducida superficie y escasa población del Territorio, de su insatisfactoria situación económica y de la actitud de algunos sectores que exigen la separación, no era nada sorprendente que existieran divergencias de opinión sobre la independencia. En realidad, la situación actual podría muy bien provocar un conflicto y conducir a la violencia. Por su parte, el Sr. Ondó Edú deploraba todas estas alusiones a la separación; el Territorio había constituido una unidad por espacio de más de un siglo; sólo se había empezado a hablar de separación desde que tenía un régimen autónomo, pero la población de Río Muni había dedicado su vida al Territorio en totalidad. Aunque el Sr. Ondó Edú no se oponía en modo alguno a la independencia, abrigaba dudas en cuanto a si los acontecimientos subsiguientes

redundarían en beneficio de la población, a menos que se resolvieran los problemas que había mencionado.

146. En otra reunión celebrada el mismo día entre el Subcomité y los miembros del Consejo de Gobierno, el Sr. Ondó Edú encareció a sus colegas que no dejaran trascender demasiado sus disensiones. La separación, si era inevitable, sólo debía realizarse después de la independencia. Más la unidad era esencial tanto para lograr la independencia como para conservarla. En su opinión, muchos de los requisitos indispensables para la existencia de una nación, tales como la homogeneidad de la población, la viabilidad económica y la existencia de cuadros administrativos y otros, no existían aún en el Territorio.

147. El Sr. Ondó Edú observó con gran pesar que bajo el sistema actual no estaba facultado, como Presidente del Consejo de Gobierno, para elegir a sus colegas. En consecuencia, poco sorprendente era que no hubiera consenso entre los miembros del Consejo sobre la fecha de la independencia. Teniendo en cuenta los problemas del país, el Sr. Ondó Edú opinaba que España había impuesto al Consejo la tarea de componer un "plato roto". Ni él ni el Consejo tenían la autoridad necesaria para resolver estos problemas.

148. El Sr. Ondó Edú declaró también que acogería con satisfacción los consejos del Subcomité sobre la cuestión de la independencia. Aunque algunos elementos españoles preferirían ver el país destruido antes que hallarse privados de la posibilidad de explotarlo, ni el Consejo ni el Gobierno de España querían que esto sucediera. El Sr. Ondó Edú confiaba en que, antes de la expiración del mandato del actual Consejo, se llegaría a un acuerdo sobre los cambios necesarios para el funcionamiento adecuado del régimen autónomo como condición preliminar de la independencia. En su opinión las negociaciones con España deberían comenzar antes de la expiración del mandato del Consejo, a fin de que pudieran adoptarse las disposiciones constitucionales, económicas y de otra índole previas a la independencia. Si el Gobierno de España se mostrase reacio a cooperar en este sentido, el propio Sr. Ondó Edú presentaría una petición a las Naciones Unidas.

149. En cuanto al sistema electoral, el Sr. Ondó Edú no formulaba objeción alguna contra los arreglos actuales relativos a las elecciones para la Asamblea General, pero lamentaba no tener voz ni voto en la elección de los miembros del Consejo de Gobierno. También lamentaba que no tuviera poder ejecutivo alguno. En consecuencia, ocupaba una posición puramente nominal.

150. El Sr. Nicolás Itoha explicó que, al declarar anteriormente que en la actualidad no era preciso fijar una fecha para la independencia, no pensaba en que se retrasara indefinidamente la adopción de una decisión al respecto. Su opinión era que, antes de adoptar cualquier decisión sobre la independencia, debían resolverse los problemas internos del Territorio mediante la separación económica y administrativa de Fernando Poo y Río Muni.

151. El Sr. Borico Toichoa coincidió con el Sr. Nicolás Itoha y añadió que la independencia sería una palabra hueca si el Territorio tuviera que continuar dependiendo en gran medida de la asistencia externa. A este respecto, observó que el 90% de los técnicos de Guinea Ecuatorial procedían de Europa, que en el Territorio no había buenas carreteras, que el ejército era sufragado por España, que sólo había un puñado de abogados autóctonos y ningún ingeniero. Habría que esperar unos cinco años antes de poder subsanar esas deficiencias en la medida necesaria para justificar la concesión de la independencia.

152. El Sr. Cándido Nang observó que no había ningún programa educativo destinado a atender las necesidades de técnicos del Territorio en previsión de la independencia. Esta observación se aplicaba también a otras esferas. Como Consejero de Educación, carecía del poder necesario para crear tal programa.

153. Contestando a unas preguntas el Sr. Ondó Edú declaró que la Comisaría General no participaba en el nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno ni tampoco en las reuniones del Consejo. Antes de la autonomía, los

partidos políticos tenían que funcionar clandestinamente. Aunque desde entonces no habían sido reconocidos de manera oficial, su existencia se toleraba oficialmente. Se les exigía que obtuviesen autorización oficial para celebrar reuniones públicas. En ese momento intervino el Sr. Macías Nguema para decir que, en la práctica, rara vez se había concedido tal autorización al MONALIGE para sus reuniones.

154. A continuación, el Sr. Ondó Edú dijo que, en respuesta a la sugerencia española de que los partidos políticos existentes se fundieran en un movimiento único, poco después de establecerse la autonomía, se había celebrado en Bata un congreso de las agrupaciones políticas locales y de las radicadas en el extranjero. El congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre un movimiento político unificado. A principios de 1965 se había celebrado otra conferencia en Moka, en la que los partidos políticos de Fernando Poo convinieron en interrumpir temporalmente sus actividades. Por esta razón el Sr. Ondó Edú y sus colegas eran reacios a que se les identificara con cualquier agrupación política determinada en la actualidad.

155. El Sr. Nicolás Itoha señaló una comunicación escrita presentada al Consejo de Gobierno por él y por los Sres. Borico Toichoa, Watson Bueko y Maho Sicacha el 3 de junio de 1966, y recomendó al Subcomité que la considerara detenidamente. En esa comunicación los autores sostenían que la unidad política en que se funda la autonomía era ficticia. La unidad política presuponía la existencia de una región que en realidad no existía. No sólo entre Fernando Poo y Río Muni no había continuidad geográfica, sino que su población no tenía ningún origen común étnico, cultural, histórico ni lingüístico. Sus esperanzas de que esta falta de base para la unidad se supliera con la experiencia habían quedado frustradas.

156. Según esa comunicación, el grupo de Río Muni en el Consejo de Gobierno tendía marcadamente a llevar a todas las mejoras hacia su provincia; mientras Fernando Poo aportaba el 81% del ingreso presupuestario del Territorio, los gastos realizados por Río Muni ascendían al 83%. El contrabando de cacao y café que había surgido entre Río Muni y los países vecinos amenazaba a Fernando Poo con la ruina económica. Según los autores, había habido una considerable emigración de Río Muni a Fernando Poo que había provocado profundos cambios en la estructura de la población de esa isla. Se registraban entre los bubis, principal grupo étnico de la isla, y los pamúes de Río Muni fricciones y tirantez que se habían acentuado con el régimen actual.

157. En conclusión, los autores pretendían que el derecho a la libre determinación no pertenecía en forma exclusiva al conjunto de los habitantes del Territorio. Negar este derecho a la población de Fernando Poo, que constituía un grupo homogéneo, sería contrario a las normas internacionales más elementales. Con objeto de garantizar el ejercicio de este derecho a la población de Fernando Poo, pedían la separación económica y administrativa de las dos partes del Territorio. Puesto que las medidas legislativas necesarias estaban dentro de la jurisdicción del Gobierno de España, no era preciso que la Asamblea General aprobara tal solicitud por mayoría de dos tercios. Debía celebrarse un plebiscito sobre esta cuestión, en el que los votos de los electores tuvieran validez sólo en sus provincias de origen.

158. El 21 de agosto de 1966 el Subcomité celebró con los miembros del Consejo de Gobierno otra reunión en la que éstos expusieron sus opiniones sobre la independencia.

159. El Sr. Nicolás Itoha declaró que cuando se acercase el momento de la independencia, después de las negociaciones a que se había referido en una declaración anterior, cabría estudiar la función que podrían desempeñar las Naciones Unidas en los preparativos de la independencia. De necesitarse asistencia, se recurriría a las Naciones Unidas. El Sr. Nicolás Itoha no tenía nada que añadir a lo que había dicho anteriormente sobre la cuestión general de la independencia.

160. El Sr. Borico Toichoa no veía la necesidad de que las Naciones Unidas interviniesen en las elecciones ni en ningún otro proceso encaminado a lograr la independencia. Pero no se opondría a que se examinase la posibilidad de invitar a obser-

vadores de las Naciones Unidas. Sólo se pediría a las Naciones Unidas que interviniesen en el caso de que el Gobierno de España negara la independencia al Territorio cuando la población la pidiera.

161. Los Sres. Macías Nguema y Nsue Nchama opinaron que, en vista de la situación del Territorio, se necesitaría la presencia efectiva de las Naciones Unidas durante la celebración de cualquier plebiscito o elección.

162. El Sr. Watson Bueko señaló que no había habido observadores de las Naciones Unidas en el plebiscito de diciembre de 1963 sobre la Ley de Bases. Sin embargo, ese plebiscito se había llevado a cabo con entera libertad y en debida forma. Le era indiferente que se invitara o no a observadores de las Naciones Unidas a presenciar un futuro plebiscito. Pero habría que asegurarse de que esos observadores fuesen honorables y completamente imparciales, que no tratasen de imponer sus propias ideas ni de intervenir en los asuntos pendientes entre la población y el Gobierno de España. El Sr. Watson Bueko pensaba en un plebiscito en el que la población indicara si quería o no la independencia, seguido de negociaciones y elecciones. La función de los observadores de las Naciones Unidas, caso de que la tuviesen, debería limitarse a la comprobación de la libertad de las elecciones.

163. El Sr. Cándido Nang creía que la participación de las Naciones Unidas en el proceso de evolución del Territorio hacia la independencia garantizaría la conformidad del resultado con los deseos de la población. Pensaba que a este respecto sería necesaria la asistencia de las Naciones Unidas.

164. El Sr. Maho Sicacha no veía razón alguna para no invitar a las Naciones Unidas a que observasen todos los procesos conducentes a la independencia. Creía que sería útil contar con la asistencia de las Naciones Unidas en este sentido.

165. El Sr. Ondó Edú declaró que, para disipar cualquier duda acerca de la autenticidad de los procesos conducentes a la independencia y acerca de los resultados, se debería pedir a las Naciones Unidas que enviaran observadores. De esta forma, las intenciones y la actuación de España con relación al Territorio quedarían claramente demostradas.

166. En cuanto a los cambios que debían introducirse en el actual sistema electoral, los Sres. Macías Nguema y Nsue Nchama se mostraron partidarios de elecciones directas con un sistema de sufragio universal para todas las personas de ambos sexos mayores de 21 años. El Sr. Macías Nguema observó que las mujeres se quejaban de que no tenían derecho de voto. El Sr. Cándido Nang coincidió con esta observación, pero prefería que la edad para poder votar se redujera a 18 años; no veía ninguna razón para no admitir el ejercicio del derecho de voto por todos los mayores de 18 años, ya que esa era la edad mínima fijada para contraer responsabilidades matrimoniales.

167. A juicio del Sr. Watson Bueko, el sufragio universal produciría una democracia de tipo inorgánico que tal vez funcionase en países muy desarrollados, pero no en Guinea Ecuatorial donde, a su modo de ver, una democracia orgánica era más apropiada. Con un sistema de democracia orgánica, los diferentes sectores de la vida nacional estaban representados en los órganos gubernamentales. En consecuencia, prefería que se mantuviera el sistema actual, con algunos ajustes para atender las necesidades y circunstancias reales. En vista de la dificultad con que tropezaba la población para distinguir los programas, las personalidades y los intereses políticos, le convenía más estar representada según los grupos y sectores de intereses a los que pertenecía.

168. El Sr. Borico Toichoa no tenía observaciones que hacer a este respecto. El Sr. Nicolás Itaho estaba a favor del sistema actual, aunque no se oponía terminantemente al sufragio universal de los adultos. Los Sres. Maho Sicacha y Ondó Edú eran partidarios del sufragio universal de los adultos.

169. Refiriéndose a la información de que solamente se encarcelaba a los africanos culpables de alguna infracción penal, el Sr. Watson Bueko dijo que estas afirmaciones eran ciertas con respecto al período anterior a la autonomía, pero que no podían aplicarse a la actualidad. Los residentes españoles cul-

pables de alguna falta podían ser expulsados del Territorio. Los que cometían algún delito cumplían penas de prisión fuera del Territorio, por lo general en Las Palmas. Sin embargo, hasta el momento de la vista esas personas pueden ser encarceladas preventivamente en prisiones locales.

170. El Sr. Macías Nguema afirmó que la administración de justicia en el Territorio era discriminatoria. Señaló que todos los magistrados de los tribunales eran españoles. Las Naciones Unidas tenían el deber de garantizar a la población la igualdad de derechos. El Sr. Cándido Nang añadió que no debían condenarse las leyes en sí, sino su aplicación discriminatoria. Los africanos y los españoles estaban sujetos a las mismas leyes, pero la aplicación de esas leyes, así como las sanciones que entrañaba su infracción, eran diferentes. El Sr. Nsue Nchama dijo que jamás había oído que se hubiese encarcelado en el Territorio a un residente español declarado culpable.

171. Según el Sr. Borico Toichoa, de nada servía recordar incidentes ocurridos en un pasado lejano. Hizo observar que el Territorio no era aún independiente. El Sr. Maho Sicacha declaró que, según la experiencia que había adquirido en el ejercicio de su profesión de abogado, los residentes españoles rara vez cometían algún delito punible con prisión. Los que cometían tal delito cumplían su condena fuera del Territorio en prisiones que reunían las condiciones mínimas del Código Penal español. En Guinea Ecuatorial no había cárceles de ese tipo. El Sr. Ondó Edú señaló que la administración de justicia no era de la competencia del Consejo de Gobierno. Por su parte, había tenido ocasión de quejarse a la Comisaría General por la excesiva indulgencia con que se trataba a los delinquentes, incluidos los africanos.

172. En respuesta a una pregunta, el Sr. Nsue Nchama confirmó la declaración formulada en el Subcomité por algunos peticionarios en el sentido de que, en virtud de una ley de 4 de mayo de 1948 aún vigente, se limitaba a cuatro hectáreas la superficie de tierras que podía poseer un africano.

173. En cuanto a los presos políticos, el Sr. Macías Nguema dijo que, aunque había habido algunos en el pasado, ahora sólo quedaban en la cárcel, a su entender, tres o cuatro personas que procedían de fuera del Territorio. Antes el número de presos era de seis o siete, pero uno de ellos había sido puesto en libertad precisamente a raíz de una intervención del propio Sr. Nguema.

174. El Sr. Nicolás Itaho negó que hubiera presos políticos. El Sr. Cándido Nang observó que, aunque tal vez no hubiera personas encarceladas por motivos políticos, no era difícil meter en la cárcel a los que manifestaban opiniones políticas adversas, culpándolos de algún delito. El Sr. Cándido Nang conocía uno de estos casos.

175. En conclusión, los miembros del Consejo de Gobierno opinaron sobre si la población de la Guinea Ecuatorial estaba preparada para la independencia. El Sr. Cándido Nang creía que sí. El Sr. Nsue Nchama coincidió con él, pero opinó que la independencia no debía concederse inmediatamente, sino para julio de 1968. El Sr. Macías Nguema estaba firmemente convencido de que el Territorio debía obtener la independencia hacia julio de 1967. El Sr. Maho Sicacha prefería que se iniciaran negociaciones inmediatamente con miras a la independencia en el plazo de dos años. El Sr. Nicolás Itaho consideraba que la población no estaba preparada para la independencia; sólo podía decirse que lo estaba si se consideraba la independencia como una especie de lotería en que la población participase con la esperanza de obtener beneficios fortuitos. El Sr. Watson estimó que las negociaciones debían empezar en un futuro muy próximo con objeto de fijar una fecha para la independencia.

176. Hacia el final de la reunión, el Sr. Macías Nguema presentó al Comité una comunicación firmada por él y por los Sres. Cándido Nang y Nsue Nchama, relativa a la independencia del Territorio. En dicha comunicación los autores declaraban que no había ningún asunto más importante para la población que la independencia de su Territorio. Según ellos, los órganos gubernamentales del régimen actual no poseían atribuciones que les permitieran llevar a cabo los cambios requeridos para promover el bienestar espiritual y material de la

población. Recordaban que en varias cartas dirigidas al Gobierno español habían pedido a España o, en caso necesario, a las organizaciones internacionales competentes: primero, que fijasen fecha para la independencia antes que expirase el mandato del actual régimen de autonomía y, segundo, que se constituyeran comisiones representativas para formular, con asistencia exterior, incluso la de las Naciones Unidas en caso necesario, acuerdos que constituyeran la base de la independencia.

177. En una declaración final dirigida al Subcomité el 24 de agosto de 1966 el Sr. Ondó Edú dijo que se debía poner término inmediatamente al régimen autónomo y que era preciso iniciar sin dilación negociaciones para la independencia, a fin de que el Territorio la obtuviera en el plazo de dos años. Si el período de negociaciones propuesto por el Consejo de Gobierno no contara con sincera acogida por parte de España y si, en consecuencia, el pueblo de la Guinea Ecuatorial insistiera en una independencia prematura, el Sr. Ondó Edú no se consideraría responsable de las consecuencias. El período de dos años que se había propuesto para las negociaciones constituiría una etapa de preparación y de experiencia en el ejercicio de mayores responsabilidades y libertad de acción. Para terminar, el Sr. Ondó Edú señaló que las decisiones de la población debían regirse por la unidad y la indisolubilidad si se quería llegar a una solución pacífica de los problemas del Territorio.

C. Reuniones con grupos e individuos afiliados al MONALIGE

178. Antes de trasladarse al Territorio el Subcomité examinó varias peticiones de los dirigentes del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE) (A/AC.109/PET.529 y Add.1).

179. En estas peticiones los dirigentes del MONALIGE declararon que consideraban la independencia como el mejor medio de solucionar los problemas de la Guinea Ecuatorial, tanto los de índole institucional como los económicos y sociales. También reiteraron su petición anterior de que se fijara la fecha de la independencia antes de expirar el mandato de la administración actual. A su juicio, la fijación de la fecha de la independencia se justificaba por el estado de madurez política del Territorio. Además, la posición económica del Territorio, que España había señalado en reiteradas ocasiones, le daba mayor derecho a la independencia que a muchos otros países que habían llegado a la independencia en circunstancias menos favorables.

180. A este respecto recordaron que en un discurso pronunciado el 31 de diciembre de 1965, el Jefe del Estado español había manifestado su firme voluntad de seguir promoviendo sin retrasos ni vacilaciones el progreso del pueblo de la Guinea Ecuatorial a fin de que estuviera plenamente preparado para enfrentarse con el futuro. En el mismo discurso el Jefe del Estado había declarado que, en todo caso, España defendería su voluntad de libre decisión. Los peticionarios recordaron luego que, en una declaración que hizo en Argel el 20 de junio de 1966, el Presidente del Consejo de Gobierno había dicho que, según las informaciones oficiales de que disponía, era deseo expreso y formal del Gobierno español "que Guinea Ecuatorial escoja cuando quiera su propio camino político, es decir la independencia total".

181. Los peticionarios también deploraron las maniobras que, según ellos, se habían efectuado con la aprobación de algunos miembros del Gobierno autónomo para mantener a los autóctonos de la Guinea Ecuatorial en una situación de subordinación política, económica y social. Señalaron la ausencia de un criterio racional de africanización de la administración y la evidente discriminación, en cuanto a grado, salario y otras condiciones de servicio, entre los españoles europeos y los africanos que hacían el mismo trabajo administrativo. A esto se debió la huelga de funcionarios que tuvo lugar del 20 al 25 de abril de 1966.

182. Además, los peticionarios se quejaron de que las actividades del MONALIGE, que contaban con el apoyo de la gran mayoría de la población de la Guinea Ecuatorial, eran obstaculizadas sistemáticamente, ahogándose así la expresión de la voluntad del pueblo. Por ejemplo, una reunión del MONALI-

GE que debía efectuarse el 19 de diciembre de 1965 para presentar formalmente la propuesta de independencia había sido suspendida por el Gobierno español. Posteriormente, en enero de 1966, los dirigentes del MONALIGE habían enviado una nota al Gobierno español para pedir que las fuerzas militares españolas situadas en la Guinea Ecuatorial suspendiesen toda acción armada o represalia contra la actividad política relacionada con la independencia y que se fijase inmediatamente una fecha para la pronta independencia del Territorio mediante un plebiscito que debería efectuarse con los auspicios de las Naciones Unidas. En esa nota también se pedía que se diese libertad de acción al MONALIGE y que se le autorizara a celebrar conversaciones con el Gobierno español respecto de la fijación de la fecha y condiciones de la independencia. No se recibió contestación a esa nota.

183. Según los peticionarios, un ejemplo de la inmovilidad del Gobierno español era el no haber respaldado una moción aprobada por la Asamblea General del Territorio el 29 de abril de 1966, encaminada a revocar al Consejo de Gobierno por su falta de autoridad y de prestigio ante el pueblo, la incapacidad de su administración y su despilfarro de los fondos públicos. El Comisario General ni siquiera remitió oficialmente esta moción al Gobierno español.

184. Además, ciertas instituciones metropolitanas habían proporcionado apoyo financiero a un movimiento procolonialista conocido por el nombre de MUNGE, partidario de la continuación de la presencia española en el Territorio. Las maniobras neocolonialistas del Gobierno español habían tenido por fruto la creación de un micronacionalismo artificial entre los naturales de Fernando Poo, encaminado a separar la isla de la entidad territorial y mantenerla unida a los intereses españoles. Por ese motivo, el MONALIGE proclamaba solemnemente la inviolable unidad de Fernando Poo y Río Muni, que debían lograr su independencia como entidad política unida.

185. Los actos del Consejo de Gobierno estaban sujetos a censura previa y al dictamen de las autoridades españolas en un grado que, según los peticionarios, quedó demostrado por un suceso reciente. En mayo de 1966 el Consejo de Gobierno había presentado al Gobierno español un informe general sobre el Territorio en el que, entre otras cosas, señalaba que sus relaciones con la Asamblea General no habían sido armoniosas y que no se había progresado nada con respecto a los varios proyectos previstos en el actual plan de desarrollo. En su informe el Consejo de Gobierno también subrayó la urgente necesidad de anular las leyes que prohibían el establecimiento de compañías extranjeras y la entrada de capital extranjero. A principios de junio de 1966 el Director General de Plazas y Provincias Africanas del Gobierno español se había trasladado al Territorio, había celebrado una reunión con el Consejo de Gobierno y había obtenido su consentimiento para preparar una versión revisada del informe en la que no se hacía referencia a las cuestiones antes mencionadas.

186. Al insistir en que se declarase la independencia en la fecha más próxima posible, el MONALIGE estaba dispuesto a garantizar, como concesión, la seguridad personal y los bienes de los españoles, la libertad de entrada de los inmigrantes españoles en el Territorio y la prioridad de las relaciones políticas, económicas, culturales y de otra índole con España.

187. El 19 de agosto de 1966 un grupo de diecinueve peticionarios afiliados al MONALIGE, dirigidos por un abogado, el Sr. Tomás Alfredo King, se dirigió al Subcomité en Santa Isabel. Tras una descripción de la composición étnica del Territorio, los peticionarios informaron al Subcomité que el MONALIGE, que había sido fundado veinte años atrás, representaba a todos los grupos étnicos del Territorio y estaba luchando por la libertad y el bienestar del pueblo. Ninguno de sus miembros actuales tenía ningún cargo oficial en el Gobierno autónomo. Existía otro grupo político, conocido por el nombre de MUNGE, cuya formación, según ellos, había sido motivada por maniobras colonialistas encaminadas a dividir a la población y por ambiciones personales. El MUNGE estaba integrado por personas que tenían cargos oficiales o aspiraban a tenerlos y que habían recibido favores especiales. Recordaron que el Sr. Ondó Edú, que era un dirigente del MUNGE,

había sido anteriormente miembro del MONALIGE. En conclusión, informaron al Subcomité que el pueblo apoyaba unánimemente la petición de independencia inmediata formulada por el MONALIGE.

188. El 20 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión con el mismo grupo de peticionarios. El Sr. Alfredo King informó al Subcomité que el MONALIGE tenía un objetivo definido, a saber, la independencia inmediata. Los habitantes del Territorio no eran más que ciudadanos de cuarta clase, privados de los derechos, la protección legal y los privilegios que se reconocían a los residentes españoles.

189. Observó, por ejemplo, que el 99%, aproximadamente, de las tierras cultivables estaba en manos de los colonizadores. Se autorizaba a los colonos españoles para comprar tierras libremente y sin limitación alguna, mientras que los autóctonos sólo podían adquirir cuatro hectáreas por persona. Si un autóctono deseaba adquirir más de cuatro hectáreas, sólo podía hacerlo a nombre de otro miembro de su familia, quien tenía que demostrar que cultivaba personalmente la tierra. En las leyes pertinentes y en la aplicación de las mismas, según constaban en la Gaceta Oficial, podían encontrarse pruebas de estas incapacidades. El Sr. King añadió que, en teoría, un autóctono podía adquirir otras tierras en pública subasta. Pero, por una parte, esas subastas sólo se celebraban en Madrid y, además, podían asistir a ellas todos los ciudadanos, compañías y sociedades españolas, con el resultado de que un autóctono se encontraba evidentemente en una situación en extremo desventajosa. El sistema de subastas públicas había dado lugar a mucho ausentismo entre los terratenientes y a la constitución de extensísimas plantaciones, como la de ENASA, que era de propiedad española y controlaba 10.000 hectáreas.

190. El comercio estaba casi totalmente en manos de residentes españoles. Los africanos que querían dedicarse al comercio no gozaban de ninguna protección legal y, por lo tanto, no estaban en condiciones de competir en ese terreno. La situación había empeorado con las leyes recientes que concedían a los residentes españoles los mismos derechos que a los autóctonos. El Sr. King observó a este respecto que el pueblo de la Guinea Ecuatorial no gozaba de los mismos derechos en España que los ciudadanos españoles. No era de sorprender que no hubiese ningún comerciante africano importante, ni siquiera en los negocios de cacao y de café.

191. Refiriéndose a las condiciones de trabajo, el Sr. Alfredo King declaró que la estructura del trabajo era piramidal, con los residentes españoles en la cumbre y los trabajadores africanos en la base. El sistema de salarios era altamente discriminatorio y la legislación vigente tendía a perpetuar esa situación. Los trabajadores africanos importados, que solían ser contratados por dos años, recibían salarios bajísimos y no se les permitía ocupar otras posiciones ni trasladarse a otras partes del Territorio antes de la expiración de su contrato. El salario mínimo establecido por ley, a saber, 900 pesetas mensuales con jornadas de ocho horas era absolutamente insatisfactorio. Además, los trabajadores africanos importados sólo recibían en realidad el 50% del salario, quedando depositado el 50% restante, que sólo se les pagaba cuando iban a salir del Territorio. No existía ninguna disposición con respecto a pensiones ni a seguridad social para los trabajadores africanos. En cambio, los residentes españoles que trabajaban en las granjas como capataces o inspectores recibían por lo menos 5.100 pesetas mensuales.

192. Los trabajadores africanos sólo disfrutaban de veinticuatro días de vacaciones cada dos años. Los trabajadores africanos importados debían renovar sus contratos dentro de los diez días de la expiración de los mismos; en caso de no hacerlo, eran deportados. Los trabajadores africanos autóctonos se encontraban en el mismo caso y, si no renovaban sus contratos, quedaban expuestos a encarcelamiento en virtud de la ley de vagos. Toda la contratación de mano de obra africana debía efectuarse bajo fiscalización del Gobierno. Por otra parte, los trabajadores españoles que también venían al Territorio con contratos de dos años no sólo disfrutaban de quince días de vacaciones anuales, sino que al terminar el contrato se les concedían seis meses de vacaciones en el hogar, con pasajes pagados para ellos y sus familias.

193. En cuanto a la administración de justicia, el señor King declaró que sólo los africanos eran encarcelados por delitos comunes. Las condiciones en las cárceles eran espantosas. En cambio, los residentes españoles acusados de los mismos delitos nunca eran enjuiciados o, si lo eran, se les condenaba a pequeñas multas. Sólo se les enjuiciaba por delitos graves como el homicidio y, si se les declaraba culpables, eran condenados a prisión; en tales casos cumplían su condena en España y no en la Guinea Ecuatorial. El residente español que hubiese de permanecer en prisión preventiva era instalado en un hotel y se le proporcionaba gratuitamente la comida.

194. En el campo de la actividad política, el MONALIGE era el único movimiento auténtico. Había luchado continuamente por la independencia. Entre sus miembros habían figurado antes los Sres. Ondó Edú y Maho Sicacha, pero éstos, al desempeñar cargos oficiales, habían adoptado una actitud conservadora en política. El MONALIGE deseaba que la Guinea Ecuatorial lograra la independencia como una entidad única o, si ello resultaba imposible, como una federación cuyas comunicaciones, transporte, defensa y relaciones exteriores fueran controlados por un gobierno central. El MONALIGE deseaba que se iniciaran negociaciones sin demora con el fin de establecer una fecha para la independencia. Uno de los temas que debían tratarse en esas negociaciones era la base de la futura cooperación con España. El MONALIGE quería la independencia inmediata, pero como era poco probable que las negociaciones previstas, si se iniciaban enseguida, concluyeran antes de fines de 1966, estaba dispuesto a esperar hasta principios de 1967 la concesión oficial de la independencia.

195. El sistema electoral, según los peticionarios del MONALIGE, no era democrático. En efecto, dos tercios de los miembros de los órganos gubernamentales del Territorio eran designados por el Gobierno español y sectores afines. El tan cacareado voto afirmativo del pueblo en el plebiscito de 1963 había sido resultado de maniobras de las autoridades españolas. El clero había ejercido también una poderosa influencia. La preocupación del Gobierno español por proteger a los residentes españoles contra toda manifestación de las legítimas quejas del pueblo africano se reflejaba en la continua presencia de gran número de soldados en el Territorio. En las aguas territoriales había tres cañoneras repletas de infantes de marina. Aparte de la fuerza de policía se hallaban destacados en el Territorio más de cien militares, guardias civiles, con armas modernas. Estos guardias civiles circulaban entre el pueblo haciendo demostraciones de fuerza armada e interviniendo en la vida política y social del Territorio, así como en muchos asuntos de la administración pública. Tenían instrucciones de reprimir toda demostración política. Una escuadrilla de aviones militares tenía también su base en el Territorio, y lo sobrevolaba diariamente.

196. Los peticionarios presentaron después al Subcomité, como memorando, una comunicación firmada por ellos y otras veintidós personas. Además de las opiniones expresadas oralmente por los peticionarios, la comunicación contenía la información siguiente.

197. El deseo más ferviente del pueblo de la Guinea Ecuatorial era el de lograr la independencia inmediata, es decir, antes de fines de 1966, por medio de un referéndum. El pueblo consideraba que la independencia era el punto de partida para la construcción del porvenir del país con libertad y sin injerencias perjudiciales.

198. El dominio de la comunidad española sobre la vida económica del país quedaba demostrado por el hecho de que en el órgano de administración de la junta ejecutiva de la cámara de comercio, que constaba de catorce miembros, sólo había dos indígenas. Entre los nueve miembros de la sección de la cámara que se ocupaba del cacao sólo había dos indígenas. Todos los miembros de las secciones de café, de productos diversos, de comercio y banca, y de industrias eran españoles.

199. De las exportaciones de cacao de Fernando Poo, que ascendían en total a 28.700.000 kilogramos, sólo 3.980.000 kilogramos eran producidos por cultivadores indígenas. Todo el café exportado era producido por españoles, salvo una can-

tidad insignificante que se vendía localmente a los españoles. La producción de bananas en su totalidad estaba también en manos de españoles. De los 7.600 trabajadores importados de Nigeria, todos menos 180 eran empleados por empresas españolas. De las 32.000 hectáreas de tierra cultivadas en Fernando Poo, sólo 2.170 eran labradas por indígenas. De las ventas que realizaba la Cámara de Agricultura por un total de unos 200 millones de pesetas, sólo 4 millones iban a parar a los indígenas. De las exportaciones de productos, que ascendían a 14.500.000 pesetas, los permisos concedidos a indígenas representaban un valor de 850.000 pesetas. En cuanto a las importaciones, que representaban un importe de 17 millones de pesetas, los indígenas no habían conseguido ni un solo permiso.

200. Después de la reunión el Subcomité recibió de un grupo de trabajadores indígenas de Río Muni afiliados al MONALIGE una comunicación en la que protestaban porque el Gobierno español no fomentaba el bienestar del pueblo. Según esta comunicación, existía una grave diferencia entre el salario de los indígenas y el de los trabajadores españoles. El trabajador español cobraba un salario mensual de 10.000 pesetas (12.000 si era casado) y recibía otras prestaciones (una casa amueblada y siete meses de licencia para visitar su país, con viaje pagado), mientras sólo se pagaban al indígena 1.500 pesetas, con las cuales debía hacer frente a sus gastos de vivienda, muebles, etc. Los autores tenían la impresión, en vista de ciertos discursos pronunciados por el Presidente, de que sólo los peticionarios que se habían presentado ante las Naciones Unidas tenían el derecho de quejarse del sistema de salarios. Las cuestiones de salario habían provocado dos huelgas durante los primeros dos años del régimen autónomo. La primera había sido de funcionarios públicos y la segunda se había declarado contra la Compañía de Telecomunicaciones, S. A. Se habían anunciado otras dos huelgas.

201. El Gobierno de España no había cumplido su promesa de conceder libertad al Territorio, so pretexto de que el pueblo no estaba preparado para ella. Entretanto, había hecho muy poco para promover el desarrollo económico. Los autores de la comunicación habían sido perseguidos a causa de su ardiente deseo de libertad; de hecho, pocos días antes, la Guardia Civil había confiscado y destruido los carteles que se proponían llevar a una demostración de bienvenida al Subcomité. En cambio, cuando llegaba algún ministro del Gobierno español, se daba asueto a todos los trabajadores.

202. En otra comunicación presentada al Subcomité al mismo tiempo, el Sr. Pastor B. Torao Sikara, Presidente del MONALIGE, recordó en su propio nombre y en el del MONALIGE que en discursos pronunciados a fines de 1964 y en 1965, el Jefe del Estado español había manifestado que España no pondría obstáculos a la evolución de la Guinea Ecuatorial, sino que le daría la independencia en cuanto la pidiera. El Sr. Torao Sikara mencionó también una declaración posterior formulada en las Naciones Unidas en septiembre de 1965, en la que el representante de España dijo que correspondía al pueblo de Guinea solicitar y fijar la fecha de su independencia. En vista de estas declaraciones, el Subcomité debía usar de su influencia para que se otorgara la independencia al Territorio el 6 de enero de 1967 y para que las negociaciones con España se iniciaran inmediatamente.

203. El Subcomité celebró otra reunión con setenta y seis representantes del MONALIGE, entre ellos doce mujeres, el 21 de agosto de 1966. En aquella entrevista el Sr. Alfredo King explicó que toda la tierra era propiedad del Gobierno español y no podía adquirirse sino por su conducto. El sistema de pública subasta para la adquisición de terrenos había sido establecido por ley promulgada el 4 de mayo de 1948. Fuera del sistema de pública subasta, la adquisición de tierras se limitaba — como antes se dice — a cuatro hectáreas por autónomo. En cambio, otra ley promulgada el 23 de diciembre de 1948 permitía a los colonizadores setenta y cinco hectáreas por persona.

204. Refiriéndose a la explotación por parte de los colonizadores españoles, los peticionarios presentaron documentos probatorios de que la gran mayoría de los jornaleros africanos

importados trabajaban para empleadores españoles o en plantaciones propiedad de españoles. También adujeron ejemplos de contratos concedidos a trabajadores africanos y españoles y que, a su juicio, revelaban gran disparidad de salarios y de otras condiciones de servicio entre ambas categorías. Los peticionarios expusieron, además, que las fuerzas de orden público eran excesivas para las necesidades del Territorio y que con su número se pretendía evidentemente intimidar al pueblo y desalentar las actividades políticas que apuntan a la independencia. Por ejemplo, la Guardia Civil española se componía de 1 comandante, 3 capitanes, 8 tenientes, 2 brigadas, 4 suboficiales, 19 sargentos, 49 cabos, 8 guardias primeros, 8 cornetas, 20 guardias telegrafistas y 247 guardias.

205. Los peticionarios declararon además que se oponían a la idea de separar a Fernando Poo de Río Muni, idea expuesta en ciertos círculos. Deseaban continuar las relaciones con España, pero este punto debía dilucidarse mediante negociaciones en pie de igualdad con el Gobierno español después de la independencia. Tanto esas negociaciones como otras debían realizarlas los genuinos representantes del pueblo, elegidos en elecciones libres, y no personas que representasen intereses españoles. Si surgieran dudas sobre las aspiraciones que expresaba el MONALIGE, debían someterse a un plebiscito fiscalizado por las Naciones Unidas en todo el Territorio, en iguales condiciones que el plebiscito sobre la Ley de Bases. En conclusión, los peticionarios pedían encarecidamente que el actual sistema electoral se suprimiese a favor de otro basado en el principio de un hombre, un voto. Los órganos primarios elegidos de este modo podrían, si fuere necesario, elegir representantes para órganos de más alto nivel. Pero el factor importante era establecer elecciones directas a base del sufragio universal de los adultos (de 21 años en adelante), votando como una sola unidad el electorado de ambas partes del Territorio.

206. Como ejemplo del funcionamiento del actual sistema electoral, los peticionarios manifestaron que los Sres. Pastor Torao y Abilé Bibao, que habían recibido el mayor número de votos en las elecciones para consejos de aldea y municipios, no fueron incluidos en el Gobierno, por algún motivo misterioso. Por otra parte, varios miembros de la Asamblea General ocupaban sus cargos actuales por medios que no eran la elección, o habían conseguido muy pocos votos en las elecciones. En efecto, el Sr. Rondó, uno de los miembros del Consejo de Gobierno, recientemente fallecido, dijo claramente que no había tenido que competir en las elecciones, porque el Gobierno español le había nombrado para ocupar ese cargo. Por estas razones el MONALIGE toleraba, más que reconocía, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea General.

207. Los peticionarios señalaron también una disposición de la Ley de Bases por la que se requiere que al cabo de dos años se celebren nuevas elecciones para reemplazar a la mitad de los miembros de los consejos municipales, de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno. Esa disposición ya no regía, por temor de que personas hostiles al Gobierno español pudieran sustituir a los actuales miembros de esos órganos, que eran personas gratas. En conclusión, declararon que no había libertad política en el Territorio. El único periódico era propiedad del Gobierno y no publicaba opiniones que no favoreciesen a éste.

208. En esta coyuntura, las mujeres del grupo del MONALIGE pidieron que se les permitiese presentar una petición con veinticinco firmas. Al entregarla, declararon que todas las mujeres del Territorio se preocupaban por los problemas de éste, pero que su presencia ante el Subcomité en tan modesto número obedecía a que temían por sus maridos. El Subcomité debía percatarse de que era la única esperanza de salvación del país.

209. En su petición las mujeres solicitaban la independencia total, absoluta e inmediata de la Guinea Ecuatorial y pedían que se constituyese un gobierno federal de forma democrática. Esperaban que el Subcomité les prestase apoyo incondicional en las Naciones Unidas. Estaban descontentas de la abstracta y ambigua autonomía impuesta por el Gobierno español. Exigían el comienzo inmediato de negociaciones para que la independencia se concediese el 6 de enero de 1967 a más tardar.

210. En reunión celebrada con otros representantes del MONALIGE en Bata, el 22 de agosto de 1966, se presentó al Subcomité otra petición, en la que los autores declaraban que al cabo de 165 años de colonización de la Guinea Ecuatorial, España no había preparado siquiera a un centenar de hombres para desempeñar funciones técnicas o profesionales. No había concedido número adecuado de becas a estudiantes autóctonos. El Territorio padecía injusticia social; por ejemplo, súbditos españoles que a menudo carecían de cultura profesional estaban mejor pagados que el indígena preparado para el mismo trabajo o actividad. Pese a la concesión de la autonomía, no existían programas para conseguir la independencia o para instruir a la población autóctona en las funciones que se le encomendarían al llegar la independencia. Varios dirigentes que habían propugnado la independencia, entre ellos los Sres. Aca-cio Mane Ela, Mongomayene y Edjodjomo, habían sido detenidos y fusilados por la Guardia Civil sin proceso.

211. Los autores de la petición rechazaban además la idea de que Fernando Poo fuese separado de Río Muni. El deseo unánime del pueblo del Territorio era la independencia total e inmediata y, en consecuencia, solicitaban de las Naciones Unidas que se fijase inmediatamente la fecha de la independencia y de la cesión de todos los poderes al pueblo.

212. Además, los peticionarios mencionaron una carta con 460 firmas y 165 huellas dactilares, enviada por los dirigentes del MONALIGE al Jefe del Estado español el 15 de agosto de 1966. En ella el MONALIGE, que afirmaba representar a más del 90% de la población, recordaba declaraciones de varios funcionarios y representantes hispanos a efectos de que España nunca se opondría a la libre determinación del pueblo de la Guinea Ecuatorial ni a su voluntad de cambiar su actual condición jurídica, si la mayoría así lo deseaba. Recordaban también declaraciones hechas por el Presidente del Consejo de Gobierno, según las cuales el pueblo del Territorio sería quien fijase la fecha de la independencia. En vista de esas declaraciones, y teniendo presente la madurez política del pueblo, recién atestigüada por el Ministro español de Información y Turismo, era deseo del MONALIGE que el Territorio fuese independiente desde el 1º de enero de 1967. Sin embargo, ello no implicaba deseo de romper las relaciones con España.

213. En conclusión, el MONALIGE exigía que se estableciese un comité libremente elegido por el pueblo para redactar los acuerdos en que se basaría la independencia. Esos acuerdos abarcarían puntos como el respeto a las inversiones españolas, el reconocimiento de los derechos de España en asuntos de índole económica, comercial, social y otros, y la libre entrada de todo español que deseara trabajar en el Territorio. Por último, el MONALIGE pedía que los actuales gobernantes no adoptasen medidas de represión contra nadie por sus actividades políticas y que el MONALIGE fuese oficialmente reconocido.

214. En otra petición que contiene 1.008 firmas, presentada al Subcomité el mismo día, el MONALIGE hacía una reseña histórica de la Guinea Ecuatorial desde su primer contacto con España en 1472. A partir de esa fecha, el Territorio había sufrido anexiones por conquista o como consecuencia de tratados injustos, colonialismo de variada índole y represión de toda actividad política encaminada a la liberación. Los autores de la petición exponían que los autóctonos no gozaban de derechos políticos ni cívicos. El Gobierno español no permitía la formación de partidos que representasen auténticamente al pueblo y, si éstos llegaban a formarse, sus dirigentes eran perseguidos o encarcelados. Entre esos líderes figuraban los señores Mariano Eyama, Pablo Nsue Edu, Martín Nvo Abaga, Enrique Nguema Ngono, Florentino Nculu Esono, Francisco Oyono Mico, Agapita Mangue, Miguel Elo, Mbiang Mba y otros. El hecho de que España reprimiera por la fuerza las voces de protesta y los movimientos de liberación nacional habían provocado una expatriación en masa. Como resultado de esa política, la población autóctona no estaba debidamente representada en los órganos de gobierno, compuestos de europeos y de algunos africanos que no podían reflejar las aspiraciones populares.

215. Comentando el sistema de educación, los autores afirmaban que después de cinco siglos de dominio español el ín-

dice de analfabetismo era el más alto del mundo. La enseñanza primaria no cumplía las finalidades que le son propias, y para ingresar tanto en ella como en la secundaria se imponía límite de edad. El número de autóctonos que asistía a universidades españolas era tan bajo, que resultaba imposible creer que España intentase en serio educar a la población autóctona. Escaseaban los profesores y en todos los aspectos se dejaba sentir la carencia de universidades y otras instituciones docentes. Este descuido quedaba demostrado por el hecho de que sólo noventa y dos alumnos del Territorio estudiaban en España; de ellos, cincuenta y siete lo hacían por cuenta propia.

216. En cuanto a las condiciones sanitarias, la población padecía paludismo, tuberculosis, enfermedades parasitarias, desnutrición y alta mortalidad infantil. Era alarmante la escasez de médicos y personal sanitario auxiliar. Para una población de 300.000 habitantes había sólo setenta y dos facultativos, de ellos veintisiete practicantes y ciento sesenta y tres auxiliares autóctonos. Había sólo dos hospitales de primera categoría, con un total de 741 camas, y dos de segunda, con 254. Existían además once centros sanitarios mal dotados, a veces con un médico al frente.

217. Existían diversas formas de trabajo forzoso, con sanciones para los trabajadores autóctonos que no cumplieren sus contratos de empleo. No se respetaba el principio de igual salario por igual trabajo. Los trabajadores autóctonos eran tratados cruelmente. El Gobierno español no permitía la formación de sindicatos de trabajadores, por lo cual éstos carecían de un mecanismo apropiado que defendiera sus intereses de clase. Se practicaba la discriminación racial, por cuanto un obrero español ganaba veinte veces más que el obrero guineano. La discriminación se manifestaba hasta en la preferencia dada a los españoles en lo referente a atención médica.

218. La situación económica representaba el aspecto más pernicioso del colonialismo español. El Territorio se caracterizaba por una primitiva economía de subsistencia. España era el único mercado para los productos primarios de la Guinea Ecuatorial. El control de divisas y de las importaciones y exportaciones, así como el de los precios pagados a los productores primarios, estaban en manos de España. Así, pues, la economía del Territorio dependía por completo de la metrópoli. Según la ley de 4 de mayo de 1948, aún en vigor, los indígenas no podían adquirir más de cuatro hectáreas de terreno, mientras el europeo podía tener propiedades hasta de 200.000 hectáreas. Una ley ulterior (de 24 de diciembre de 1948) reconoció 30 hectáreas de terreno gratuito a los europeos que llevasen más de diez años residiendo en el Territorio. Además, el Gobierno español no tuvo reparo en realizar una campaña de propaganda referente a su ayuda al Territorio, en la que se abstenía de revelar el origen de las subvenciones que afirmaba conceder desinteresadamente. Opinaban los autores que en materia de desarrollo económico, igual que en los aspectos sanitario y educativo, el Gobierno español debía buscar una colaboración más amplia con las organizaciones internacionales competentes, en beneficio del Territorio.

219. En conclusión, los autores exigían para el pueblo el derecho a regir sus propios asuntos y a determinar la fecha de la independencia, la cual debiera fijarse en el 15 de noviembre de 1966, a ser posible, o en su caso en el 1º de enero de 1967.

220. En otra reunión con un grupo de sesenta y seis representantes del MONALIGE, celebrada el 23 de agosto de 1966, el Sr. Angel Masie, Secretario Técnico, manifestó que era deseo del MONALIGE que la Guinea Ecuatorial proclamase la independencia lo antes posible, en paz y entendimiento con España. Además de los puntos suscitados en su petición, querían que España adoptase medidas para establecer la plena igualdad de derechos cívicos. El Sr. Alfonso Oyono Oalogo, uno de los dirigentes del grupo, expuso que a su parecer la independencia debía alcanzarse sin violencias ni discriminación racial.

221. Acto seguido, el Sr. Masie dijo que el MONALIGE comprendía el 90% de la población del Territorio. Contaba unos 195.000 afiliados, más otros 12.000 que habían solicitado serlo pero no estaban aún inscritos. En el MONALIGE había una sección femenina y otra juvenil, cuyos componentes

se convertían en afiliados ordinarios al cumplir los 21 años de edad. El MUNGE, en cambio, era un partido de minoría, favorecido por el Gobierno español y compuesto esencialmente de empleados oficiales. En él había disensiones. El IPGE, formado en el extranjero, era la organización matriz del MONALIGE. Debido a desacuerdos dentro de ese movimiento, se había formado el MONALIGE en 1962. En caso de que se celebrase un plebiscito sobre la constitución inherente a la independencia, los votos debían contarse para el conjunto del Territorio, y no separadamente por comarcas. El actual sistema electoral no era satisfactorio y los peticionarios eran partidarios del sufragio universal de los adultos, ejercido por todas las personas de más de 21 años de edad. Además, se oponían a que Fernando Poo fuese separado de Río Muni.

222. El Sr. Henri Nkona Mdong, uno de los peticionarios, expuso que, si se iniciaban negociaciones con España, el Territorio debía estar representado por el Presidente del MONALIGE, un miembro del Consejo de Gobierno y otros miembros elegidos por el MONALIGE. El Sr. Masie agregó que también otros grupos políticos podrían nombrar representantes. El Sr. Oyono no veía inconveniente en que la Asamblea General estuviese representada por un miembro.

223. Según los peticionarios, el régimen de autonomía había resultado muy poco satisfactorio. A su parecer, había gran diferencia entre el gobierno ejercido por una camarilla de colonizadores y el ejercido por un gobierno de base popular. Durante las elecciones que precedieron a la inauguración del régimen de autonomía, las actividades del MONALIGE se vieron sistemáticamente estorbadas a favor del MUNGE, que disfrutaba del apoyo de las autoridades españolas y afirmaba ser el único partido político. El MONALIGE confiaba en ganar la mayoría de los puestos en cualesquiera elecciones que no fuesen fiscalizadas ni manejadas por el Gobierno colonial. Por este motivo solicitaban que dichas elecciones fuesen vigiladas y fiscalizadas por las Naciones Unidas.

224. Después de regresar a Nueva York, el Subcomité recibió una comunicación del Sr. Atanasio Ndong Miyona, Secretario General del MONALIGE, en la que declaraba que la visita del Subcomité a la Guinea Ecuatorial representaba *ipso facto* el reconocimiento por el Gobierno español del derecho del Territorio a la independencia. Mas ésta no significaría una ruptura brutal con la antigua metrópoli, sino una transformación de relaciones basada en principios de cooperación y respeto mutuo. En consecuencia, pedía que se fijase una fecha para la independencia del Territorio.

225. En posterior comunicación, presentada poco después, el Sr. Ndong notificaba al Subcomité que, con el fin de dedicarse más de lleno a los preparativos de independencia de la Guinea Ecuatorial, había decidido dar por terminado su exilio político. Al perfilar la posición del MONALIGE, el Sr. Atanasio Ndong manifestaba que la fecha de la independencia del Territorio debía fijarse durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General. La fecha tope propuesta por el pueblo de la Guinea Ecuatorial era el 15 de febrero de 1968, y el año 1967 debía considerarse como período de transición para discutir los arreglos constitucionales y establecer un gobierno provisional antes de las elecciones generales. El pueblo del Territorio estaba firmemente resuelto a obtener su independencia como Estado unitario, aunque teniendo en cuenta las circunstancias locales y regionales. El pueblo deseaba, además, que las Naciones Unidas fiscalizaran las elecciones generales que en breve se celebrarían en el Territorio. Por último, el Sr. Ndong agradecía al Gobierno español el haber facilitado la labor del Subcomité y expresaba su confianza en que el Subcomité ayudaría al pueblo a levantar el país como un todo y a proteger sus vínculos afrohispanos dentro del continente africano.

D. Reuniones con grupos e individuos afiliados al MUNGE*

226. El 21 de agosto de 1966 el Subcomité recibió un grupo de quince representantes del Movimiento de Unificación Nacio-

* El MUNGE se conoce con las diversas denominaciones de Movimiento de Unión Nacional de la Guinea Ecuatorial, Movimiento de Unificación Nacional de la Guinea Ecuatorial y Movimiento de Unificación de la Guinea Ecuatorial.

nal de la Guinea Ecuatorial (MUNGE), llevado por su Presidente, el Sr. Agustín Eñeso Nefie.

227. En vez de hacer una declaración, el Sr. Eñeso Nefie presentó al Subcomité, en nombre del MUNGE, una comunicación escrita. En esta comunicación recordaba que el régimen autónomo establecido por la ley del 20 de diciembre de 1963 había tenido por corolario una declaración reciente del Subsecretario de la Presidencia española en el sentido de que cuando los habitantes de la Guinea Ecuatorial quisieran cambiar su presente estructura política, España no se opondría a ello. Esa declaración los había alentado a esperar la cooperación y la asistencia de España. No obstante, como etapa de transición, el régimen autónomo no había respondido a sus esperanzas. Este fracaso se debía a que la ley de 1963 tenía muchas lagunas e insuficiencias, que habían conducido a graves divisiones entre las dos partes del Territorio; a estas deficiencias se habían sumado errores humanos y técnicos. Aunque la ley prescribía modalidades de posible cambio, todos los esfuerzos en ese sentido habían resultado inútiles.

228. La existencia como nación independiente tenía por objeto el desarrollo y el progreso de la población. La independencia carecía de sentido si no se enderezaba a este fin. Al mismo tiempo, la independencia constituía un derecho natural y noble que no podía negarse alegando impedimentos de orden cultural, técnico y económico. Las peculiares circunstancias históricas de la Guinea Ecuatorial indicaban que ésta era capaz de subsistir después de la independencia con la ayuda solidaria de la comunidad mundial, como miembro de la gran familia hispana.

229. Era deseo del pueblo del Territorio que España le otorgara la independencia cuando expirara el mandato de la administración actual, el 15 de julio de 1968, aunque los errores a que se exponía el pueblo persistiesen cierto tiempo, haciendo quizá más difícil la solución de los nuevos problemas. En consecuencia, sugerían que se formara una comisión constituyente integrada por todos los sectores y grupos, principalmente por representantes de los intereses económicos, de los partidos políticos y del Gobierno, para que se dieran a conocer las diversas opiniones de los habitantes del Territorio. En vista de la fundamental importancia de la ley que redactaría esta comisión, debía celebrarse un plebiscito para la aceptación de dicha ley en abril de 1968. Si bien se creían capaces de resolver sus propios problemas, recibirían con agrado los consejos desinteresados y, en consecuencia, se alegrarían de que un miembro del Comité Especial estuviera presente durante el plebiscito.

230. Respondiendo a preguntas, el Sr. Eñeso Nefie dijo que era y había sido desde 1963 el objetivo del MUNGE unir a todo el pueblo del Territorio en un movimiento único. Su partido había perdido toda confianza en el presente Consejo de Gobierno porque éste no había respetado los deseos del pueblo. Sabía que dos miembros del Consejo habían estado afiliados al MUNGE. El Consejo no había hecho caso de las opiniones de los partidos políticos. Sin embargo, con el fin de evitar disturbios civiles, el MUNGE estaba dispuesto a tolerar su existencia, en espera de los cambios que anteriormente se propugnaban.

231. Su partido había examinado cuidadosamente la cuestión de la independencia y resuelto que la fecha de esta última debía fijarse en el 16 de julio de 1968. En cuanto a la separación de Fernando Poo y Río Muni, recordó que el lema del MUNGE era "Unidad, Paz y Trabajo". Si bien el partido reconocía la realidad de la historia, consciente de la reducida extensión del Territorio consideraba que Fernando Poo y Río Muni eran en sí demasiado pequeños para subsistir como entidades separadas. De cualquiera manera, el asunto de la separación era de orden interno y debía ser resuelto por el pueblo mismo.

232. El MUNGE había aceptado el régimen autónomo como etapa de transición, pero dicho régimen no había satisfecho las aspiraciones del pueblo. En previsión de que la independencia se concediera el 16 de julio de 1968, debían celebrarse en el intervalo negociaciones con Madrid, en las que participasen

comisiones compuestas de representantes de partidos políticos, del Consejo de Gobierno, del sector económico y de los grupos religiosos. Debía celebrarse un plebiscito en abril de 1968 sobre la futura constitución del país independiente. Este plebiscito no debía ser organizado por España, sino por el pueblo mismo en condiciones democráticas; toda persona mayor de 21 años debía poder participar en él. A este respecto el MUNGE vería con satisfacción la presencia de las Naciones Unidas en el Territorio.

233. El MUNGE esperaba que después de la independencia el Territorio mantendría relaciones económicas con cualquier otro país de su agrado. En cuanto a las condiciones sociales, el MUNGE creía que, si bien el Territorio debía mantenerse como entidad única, los intereses y los problemas de las minorías habían de tenerse en cuenta. Los miembros del MUNGE comprendían cerca del 80% de la población. Su fuerza era mayor en Río Muni que en Fernando Poo, donde eran más diversos los grupos culturales. En las filas del MUNGE había bubis, pero éstos habían sufrido recientemente la influencia de las ideas separatistas de ciertos miembros de los órganos gubernamentales.

234. En conclusión, el señor Eñeso Ñeñe informó al Subcomité que los dirigentes de la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE), reconociendo que sus fines y objetivos eran comunes, habían resuelto hacia poco fundir ese partido con el MUNGE.

235. El 22 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión en Bata con representantes de la Junta del MUNGE y la IPGE, que presentaron dos comunicaciones en lugar de exposiciones escritas.

236. En la primera comunicación, firmada por el Sr. Justino Mba Nsue, Secretario General de la Junta, se declaraba que los dirigentes deseaban una amplia independencia, sin que ello significase un obstáculo alguno a las cordiales relaciones que por la historia y la cultura unían al Territorio con España y con el resto del mundo hispánico. Además, querían mantener una sana convivencia internacional, en lo africano y en lo universal.

237. La segunda comunicación, firmada por cuarenta personas, contenía una reseña histórica del Territorio y varias descripciones relativas a las condiciones imperantes en la Guinea Ecuatorial. A este respecto, los autores manifestaban que la obra de España merecía ser destacada. Según ellos, la tasa de aumento demográfico había sido del 2% durante los últimos dieciséis años en comparación con una tasa de mortalidad del 7,8 por 1.000. El hospital de Río Muni, considerado como uno de los mejores de África, estaba dotado de 1.400 camas y el personal del servicio de salud pública estaba integrado por veintiocho médicos, cinco cirujanos y cinco farmacéuticos, asistidos por cincuenta religiosas enfermeras y cerca de trescientos cincuenta enfermeros. Además, había otros hospitales y centros sanitarios. Se habían realizado amplias campañas contra las enfermedades endémicas, entre ellas el paludismo. La tripanosomiasis y la lepra estaban en regresión y la mortalidad infantil había sido reducida en un 40%.

238. En cuanto a la enseñanza, la situación era bastante satisfactoria, aunque se registraba cierta insuficiencia respecto de la enseñanza de jornada completa, debido a la escasez de internados. En términos generales, había suficientes escuelas primarias, entre las que figuraban 302 escuelas públicas dotadas de edificios permanentes. La tasa total de escolaridad ascendía al 90,7% y la enseñanza era impartida por trescientos cincuenta maestros indígenas y europeos. El promedio de alumnos por clase era de alrededor de 41. Los niños en edad escolar representaban el 14% de la población. Los alumnos de la enseñanza media, técnica y profesional representaban el 1,2% de la población. Para la enseñanza superior, los alumnos debían ir a España, ya fuese con becas o por cuenta propia.

239. Los autores también afirmaban que durante 1962 la renta regional global se elevó a 2.036.500.000 pesetas, o sea, 7.922 pesetas por habitante. La tasa de crecimiento anual acumulativo fue del 5,5%. El índice de exportaciones del Territorio era quizá el más elevado de toda África. Casi toda la

producción del Territorio era absorbida por España, ya que ahí se cotizaba a precios superiores a los que rigen en los mercados internacionales. También se exportaban ciertas cantidades a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Bélgica y a otros países. Los principales productos del Territorio eran el cacao, el café y la madera. Aunque había aumentado ligeramente la cantidad producida por los indígenas, debido al aumento de la superficie cultivada, las fincas de los autóctonos no se explotaban tan eficazmente como las plantaciones, y todavía quedaba una gran labor por realizar para mejorar la producción y la calidad de ese producto. En cuanto a la producción de madera, para la cual se otorgan concesiones por subasta, el capital inicial necesario impedía la participación de los indígenas. Había posibilidades de introducir nuevos cultivos, tales como el caucho, el sisal, etc., así como de mejorar los productos ya cultivados. Además, había perspectivas halagüeñas en cuanto a la minería. La geología sedimentaria del Territorio parecía ofrecer buenas posibilidades de hallar yacimientos de petróleo, lignito, minerales radiactivos y mineral de hierro.

240. En lo tocante a las condiciones de trabajo, los peticionarios indicaron que la participación del trabajo en la renta global per cápita de la Guinea Ecuatorial se elevaba al 59%. La organización sindical iba progresando satisfactoriamente gracias a la obra de la Cooperativa del Campo (cacao, café, hortalizas), la Cooperativa Comercial e Industrial y el Sindicato Maderero.

241. Refiriéndose a la evolución política señalaron que los movimientos pro descolonización no habían dejado de tener repercusiones en el Territorio, donde algunos auténticos nacionalistas autóctonos habían tratado de obtener la estricta aplicación del principio del respeto al derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno y del restablecimiento de los derechos soberanos y del gobierno propio de los pueblos que se habían visto privados de ellos por la fuerza. En consecuencia, el Gobierno de España, en armonía con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, había decretado el actual régimen autónomo. Recordando que en 1965 el Presidente del Consejo de Gobierno, Sr. Bonifacio Ondó Edú, había declarado ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General que el MUNGE se había organizado para combinar las actividades de los partidos políticos existentes y obtener de esa manera el apoyo de la totalidad de la población, los peticionarios creían que la mejor perspectiva para el establecimiento de una coexistencia política residía en la creación de un consejo político encargado de estudiar los principales problemas políticos del país y de concertar un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno autónomo del Territorio.

242. También recordaron la declaración hecha en 1962 por el Sr. Luis Carrero Blanco, Subsecretario de la Presidencia, de que si algún día la mayoría de la población de la Guinea Ecuatorial deseara modificar la actual condición jurídica del Territorio, España no se opondría de ninguna manera a negociar con el pueblo acerca de su porvenir. El Sr. Carrero Blanco había declarado además que ningún otro país tenía más respeto que España por la libre determinación. Por consiguiente, el pueblo estaba agradecido a España por los esfuerzos que había desplegado para promover el desarrollo político, económico, social y cultural del Territorio.

243. En las reuniones celebradas recientemente en Argel por el Comité Especial, el Sr. Ondó Edú había declarado que, como la cuestión de la independencia afectaba directamente a todos los habitantes del Territorio, convendría que éstos conociesen a fondo la situación y que luego se les permitiera expresar libremente sus opiniones. Esa declaración del Sr. Ondó Edú, así como su apoyo a la invitación hecha por la delegación de España al Comité Especial, representaban una importante ocasión en la historia de la Guinea Ecuatorial. Los dirigentes del MUNGE-IPGE estaban agradecidos ante ese gesto de España y pedían al Subcomité que cumpliera su cometido estudiando los medios de satisfacer las aspiraciones del pueblo.

244. Para concluir, los peticionarios señalaron que la expresión de amistad y cooperación entre la Guinea Ecuatorial y España favorecía los intereses de los pueblos de ambos países.

El pueblo del Territorio deseaba que se desarrollara este interés común. El Gobierno de España había puesto a la Guinea Ecuatorial en condiciones de alcanzar un nivel económico más elevado que el de muchos otros países en desarrollo. En efecto, no sólo había basado su política en los principios fundamentales de los derechos humanos, según los reconocen las Naciones Unidas, sino que también había admitido que el pueblo del Territorio estaba capacitado para el gobierno propio. Los peticionarios consideraban que el sistema autónomo vigente constituía una etapa en el camino de la independencia. Al mismo tiempo, estimaban que la independencia no alejaría al país de España, sino que más bien lo pondría en condiciones de apreciar los vínculos que los unen y, por consiguiente, de establecer relaciones amistosas sobre una base de igualdad en el seno de la comunidad hispana. Como país africano, la Guinea Ecuatorial jamás toleraría injerencias en sus asuntos internos y respetaría la soberanía de otros países observando una estricta reciprocidad en sus relaciones con ellos.

245. Por todos los motivos expuestos, los dirigentes del MUNGE-IPGE pedían que, por medio de discusiones cordiales entre el Gobierno de España y el consejo político del MUNGE-IPGE, se fijase una fecha para la independencia de la Guinea Ecuatorial. Los acuerdos a que dieran lugar estas discusiones debían depositarse en las Naciones Unidas.

246. El 22 de agosto de 1966 el Subcomité celebró una reunión con un grupo de treinta y dos peticionarios, que representaban a la junta política del MUNGE-IPGE y a cuyo frente se hallaban los Sres. Agustín Eñeso Ñeñe, Presidente del MUNGE, Justino Mba Nsue, Secretario General del MUNGE, Antonino Eworo, Presidente de la IPGE, y Clemente Ateba, Secretario General de la IPGE.

247. El Sr. Eñeso Ñeñe recordó que dos semanas antes el MUNGE y la IPGE habían decidido formar una alianza por cuanto sus propósitos y objetivos eran similares. El señor Mba Nsue expresó su satisfacción ante la iniciativa del Gobierno español de invitar al Subcomité. Dicha invitación era señal de que los habitantes del Territorio empezaban a afirmar su individualidad y su integridad. Era cada vez mayor el número de los que asumían posiciones de responsabilidad. Deseaban la independencia, así como un amplio desarrollo económico y social, sin perjuicio de sus relaciones con España y el mundo hispánico.

248. En respuesta a preguntas, el Sr. Mba Nsue explicó que la IPGE había sido constituida doce años atrás por exiliados del Territorio en el Camerún, pero que, después de la instauración del régimen autónomo, se había creado el MUNGE con objeto de agrupar a todos los partidos políticos del Territorio en un solo movimiento. Poco tiempo atrás algunos exiliados habían regresado del Camerún y, dos semanas antes, como había señalado el Sr. Eñeso Ñeñe, los directores de ambos movimientos habían llegado a la conclusión de que la unión era necesaria para preparar el futuro del Territorio. Abrigaban la esperanza de que esta unión se ampliaría hasta incluir al MONALIGE, respecto de lo cual ya se habían celebrado conversaciones.

249. A juicio de los peticionarios, la fecha de la independencia de la Guinea Ecuatorial debía fijarse mediante negociaciones entre el Gobierno de España y una delegación del Territorio integrada por representantes de la Asamblea General y dirigentes del MUNGE y la IPGE. Entretanto, pedían que se modificase el sistema actual a fin de hacerlo más eficaz y democrático. Proyectaban para la independencia una constitución en virtud de la cual el Presidente sería elegido directamente por sufragio universal de los adultos y la Asamblea General por un colegio electoral compuesto de miembros de los concejos municipales.

250. El Sr. Eworo manifestó que, si bien se había llegado a un acuerdo para la unión del MUNGE y la IPGE, aún no se habían redactado los instrumentos pertinentes. Su grupo era partidario de la independencia total, de ser posible para fines de 1966 o principios de 1967, pero entendía que correspondía al Gobierno español fijar la fecha, después de consultar a los representantes del pueblo en una conferencia de mesa

redonda. Afirmó luego la importancia de que se informara debidamente al pueblo acerca de la situación económica y social y las perspectivas del Territorio. Su partido consideraba el régimen autónomo sólo como una etapa de transición, durante la cual el pueblo adquiriría disciplina y haría los preparativos necesarios para lograr la independencia en las mejores condiciones posibles.

251. El Sr. Eñeso Ñeñe agregó que, según se proyectaba, la mitad de los miembros de la Asamblea General serían elegidos por sufragio universal de los adultos y la otra mitad por los órganos corporativos y las cooperativas. El Presidente, elegido por sufragio universal de los adultos, estaría facultado para designar a los miembros de su gabinete. El actual sistema electoral, en virtud del cual el Presidente no podía ser elegido directamente, no resultaba satisfactorio. El señor Ateba declaró que todos los órganos legislativos debían estar compuestos de miembros elegidos directamente por el pueblo y por sufragio universal de los adultos.

252. En conclusión, el Sr. Eñeso Ñeñe dijo, en nombre del MUNGE, que debía concederse la independencia al Territorio a más tardar el 15 de julio de 1968 y que entretanto debían celebrarse negociaciones en que participasen todos los partidos políticos, confesiones religiosas y miembros de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno.

253. En respuesta a una pregunta, los dirigentes del grupo manifestaron que no estaban familiarizados con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En respuesta a otra pregunta, los dirigentes del MUNGE declararon que, después de consultar con sus homólogos de la IPGE, estaban dispuestos a apoyar ese grupo en su petición de independencia para el transcurso del año 1967. Los dirigentes de la IPGE afirmaron que su partido tenía 160.000 miembros y los del MUNGE manifestaron que sus partidarios, sumados a los de la IPGE, constituían el 80% de la población del Territorio. Según dijeron los dirigentes de la IPGE, el MONALIGE había acusado en otro tiempo al MUNGE de oponerse a la independencia sólo porque este último se había pronunciado en favor del régimen autónomo. Sin embargo, ahora que se había aclarado la posición del MUNGE a favor de la independencia, existían mejores posibilidades de que la alianza entre el MUNGE y la IPGE pudiera ampliarse para incluir al MONALIGE.

E. Reuniones con grupos e individuos afiliados a la IPGE

254. Al iniciar sus trabajos el Subcomité tomó nota de una declaración hecha ante el Comité Especial en su 447.ª reunión, el 15 de junio de 1966, por un peticionario representante de la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE). En esa declaración el peticionario informó al Comité de que el Gobierno español había perseguido a miembros de su partido y a los de otro movimiento de liberación, el Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE); muchos de ellos habían sido internados en un campo de concentración en la Isla de Annobón. La concesión de la llamada autonomía al Territorio no había cambiado para nada su antigua condición colonial. En realidad, los resultados del referéndum sobre la cuestión de la autonomía habían sido falseados por las autoridades españolas a fin de permitir la creación de un supuesto gobierno autónomo, naturalmente a las órdenes de España.

255. En 1964 el Movimiento de Unificación Nacional de la Guinea Ecuatorial (MUNGE), que había sido fundado por miembros del Gobierno autónomo para servir los intereses de los colonos españoles y de la pequeña burguesía, había sido declarado partido único del Territorio. Durante ese período, los habitantes de la Guinea Ecuatorial habían sido víctimas de destierros, expulsiones, secuestros arbitrarios, torturas y asesinatos. Una iniciativa de la dirección de la IPGE y del MONALIGE para unir a estos partidos en un nuevo movimiento que debía llamarse Frente Nacional y Popular de Liberación de la Guinea Ecuatorial (FRENAPO) había sido frustrada por la decisión de las autoridades españolas, adoptada en marzo de 1965, de reconocer al MONALIGE.

Esta decisión fue seguida por la proscripción de la IPGE y la persecución implacable de sus miembros. A este respecto, el peticionario declaró que los propósitos del Gobierno de España podían inferirse de la presencia de 12.000 soldados españoles, cuatro buques de guerra, reactores y comandos de paracaidistas en el país.

256. En conclusión, el peticionario informó al Comité Especial de que la IPGE estaba dispuesta a emplear la violencia si era necesario para defender los derechos, la libertad y la dignidad del pueblo de la Guinea Ecuatorial. Pidió, entre otras cosas, que el Comité Especial condenara el colonialismo español en el Territorio, encareciera al Gobierno español la concesión de la independencia incondicional al Territorio y exhortara a los Gobiernos africanos a que proporcionasen a la IPGE el apoyo político, moral y material necesario.

257. Antes de hacer su visita a la Guinea Ecuatorial, el Subcomité también tuvo a la vista varias peticiones de líderes de la IPGE relativas al Territorio (A/AC.109/PET.500/Add.1 y 2).

258. En estas peticiones los dirigentes de la IPGE protestaban de las detenciones, encarcelamientos, asesinatos y demás actos de represión de las autoridades coloniales españolas contra miembros de su partido. Según ellos, el número de soldados españoles destacados en el Territorio había pasado a 14.000 desde 1959. Los peticionarios protestaban también de la iniquidad y la discriminación que contra el pueblo africano del Territorio practicaba el elemento europeo español. También afirmaban que el Gobierno autónomo del Territorio era un régimen títere, que no reflejaba de ninguna manera las aspiraciones del pueblo. Citaron como ejemplo una declaración atribuida al Presidente del Consejo de Gobierno en diciembre de 1965 en el sentido de que la Guinea Ecuatorial todavía no estaba madura para la independencia.

259. Los peticionarios exigían la disolución del Gobierno autónomo y la adopción de medidas apropiadas por parte de las Naciones Unidas a fin de evitar los desastrosos resultados que había tenido en otros territorios coloniales la negativa a satisfacer las reivindicaciones de independencia.

260. Antes de su partida para el Territorio, el Subcomité recibió una comunicación del Sr. Jesús Mba Ovono, Secretario General de la IPGE, quien lamentaba en la misma no poder presentarse ante el Subcomité. Explicaba que se encontraba en exilio forzoso en Brazzaville y que muchos otros miembros de su partido estaban en una situación similar en Argelia, el Camerún, Guinea y la República Árabe Unida.

261. Según el Sr. Mba Ovono, el problema con que se enfrentaba el Comité era sencillo. Se trataba de si la Guinea Ecuatorial debía o no alcanzar la independencia en el plazo más corto posible. La respuesta de la IPGE a esta cuestión era afirmativa, en tanto que la respuesta de los colonizadores españoles era negativa. El problema estribaba en el hecho fundamental del reconocimiento por las Naciones Unidas y por la opinión mundial del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia.

262. El Sr. Mba observaba, además, que el grado de analfabetismo y de pobreza del Territorio, que el Subcomité podría apreciar durante su visita, era en sí mismo una condena del colonialismo español y una razón para librar al pueblo de la dominación española lo antes posible. Sería una contradicción alegar el atraso del Territorio como justificación para mantener la dominación colonial.

263. En conclusión, encarecía al Comité que derribara los obstáculos que se colocasen entre él y el pueblo para evitar que este último entrara en contacto con el Subcomité. También sugería que el Subcomité no debía vacilar en ejercitar su derecho a entablar conversaciones con personas ajenas a los grupos adoctrinados y controlados por la policía que se le presentarían durante su visita al Territorio.

264. El 22 de agosto de 1966 varios miembros de la IPGE presentaron al Subcomité una comunicación firmada por cinco personas. En ella los autores declaraban que la idea de fusionar a la IPGE y al MUNGE sin la oportuna celebración

de un congreso público no era más que un ambicioso proyecto personal de los Sres. Antonino Eworo Obama y Clemente Ateba Nso, que nunca habían sido verdaderos miembros de la IPGE. La IPGE había sido fundada en Sevilla de Niefang el 30 de septiembre de 1959 por los Sres. Enrique Nkuna Ndongo, Presidente; Salvador Nsamiyo Ensema, Vicepresidente; y Crisanto Masié Esono, Secretario. El Presidente y el Vicepresidente eran en ese momento Presidentes de los Comités de Base del MONALIGE en los distritos de Sevilla de Niefang y Micomeseng, respectivamente. Según los autores, esto demostraba que los miembros de la IPGE apoyaban ahora al MONALIGE.

265. Después de su regreso a Nueva York, el Subcomité recibió otra comunicación del Sr. Jesús Mba Ovono. En esta comunicación el Sr. Mba Ovono señalaba que el acuerdo firmado por España con el Rey Bonkoro de Corisco en marzo de 1779 había constituido un protectorado por espacio de cincuenta años con el único fin de permitir el establecimiento de contratos comerciales. Este acuerdo no implicaba ninguna concesión de territorios ni de poderes de gobierno y estipulaba que después de dicho período de cincuenta años su prórroga debía ser objeto de una nueva negociación. Resultaba claro entonces que España nunca tuvo ningún derecho, salvo el de la fuerza armada, para imponer su dominación a la Guinea Ecuatorial. Por esta razón, muchos habitantes de la Guinea Ecuatorial habían protestado contra la colonización española, y desde el asesinato de su líder, el Sr. Acacio Mane Ela, en noviembre de 1959, por las autoridades españolas, habían estado preparándose para luchar abiertamente contra la dominación colonial española.

266. Posteriormente las autoridades españolas, frente al desarrollo del movimiento de liberación en el Territorio, habían intensificado sus medidas represivas y detenido, encarcelado y asesinado a los dirigentes nacionalistas, muchos de los cuales se habían visto obligados a buscar refugio en los países vecinos, particularmente en el Camerún y el Gabón. Además, el Gobierno de España había efectuado una intensa campaña de propaganda destinada a persuadir al pueblo de que no debía pedir la independencia, sino contentarse con la autonomía. Había dedicado todos sus esfuerzos a este fin y, habiendo fracasado, se estaba preparando para hacer correr sangre en el Territorio. Había más de 14.000 soldados españoles en la Guinea Ecuatorial, cuatro buques de guerra patrullaban la costa y nueve reactores y un grupo de paracaidistas estaban destacados en el Territorio. La instalación de una administración autónoma títere no había hecho más que empeorar la situación.

267. En marzo de 1964 los bubis habían celebrado una reunión en Santa Isabel, bajo la presidencia del entonces Comisario General del Territorio, en la que firmaron un documento que solicitaba la separación de Fernando Poo y Río Muni. Este documento fue el resultado de maniobras de los colonos terratenientes capitalistas españoles, y debía observarse que los bubis habían reiterado recientemente estas exigencias.

268. El colonialismo español estaba dispuesto a otorgar una independencia de tipo neocolonialista con la colaboración de los traidores indígenas que no hacían más que defender los intereses de los españoles en la Guinea Ecuatorial y consentían en la explotación colonial de los recursos del Territorio. Las declaraciones hechas ante el Subcomité por ciertos líderes del Territorio, en particular por el Presidente del Consejo de Gobierno y el Presidente de la Asamblea General, iban contra las aspiraciones del pueblo de la Guinea Ecuatorial, que deseaba la independencia total e inmediata.

269. Sin embargo, debía agradecerse a España que hubiese cambiado su actitud anterior y estuviera dispuesta ahora a otorgar la independencia a la Guinea Ecuatorial. En estas circunstancias España debía aplicar las siguientes medidas como condición indispensable de la concesión de la independencia al Territorio en el plazo más breve posible: una amnistía general e incondicional para todos los presos y exiliados políticos; la disolución del falso gobierno autónomo; el reconocimiento de los partidos IPGE y MONALIGE y la organización de elecciones libres bajo el control de las Nacio-

nes Unidas sobre la base del sufragio universal de los adultos; una conferencia constitucional bajo la fiscalización de las Naciones Unidas; la formación de un gobierno con arreglo a los resultados de las elecciones y la proclamación de la independencia; y finalmente, el retiro inmediato de las fuerzas militares españolas del Territorio.

270. En conclusión, el Sr. Ovono expresaba las esperanzas de que España y la Guinea Ecuatorial seguirían manteniendo buenas relaciones tanto diplomáticas como comerciales, en pie de igualdad, y que España cumpliría lo antes posible el deseo del pueblo del Territorio de obtener la independencia total, inmediata y soberana.

F. Reuniones con otros grupos e individuos

271. El 20 de agosto de 1966, el Subcomité celebró una reunión con un grupo de diecinueve bubis dirigidos por el Sr. Agustín Santiago Sota Esele, el cual afirmó que representaban a todos los bubis de Fernando Poo. El Sr. Santiago Sota Esele informó al Subcomité que el 10 de julio de 1966 se había celebrado en Rebola una reunión de los representantes de las Juntas Vecinales de Fernando Poo y se habían aprobado varias resoluciones que figuraban en una comunicación que presentó al Subcomité. Estas resoluciones contenían una demanda de reconciliación y unificación de todos los poblados de Fernando Poo y ratificaban una recomendación que se decía había hecho la Diputación Provincial de Fernando Poo el 9 de marzo de 1965 con miras a la abolición de todos los partidos políticos. En las resoluciones también se solicitaba la separación total de Fernando Poo y Río Muni y se pedía a los órganos gubernamentales del Territorio que adoptaran las medidas oportunas a este fin.

272. El Sr. Santiago Sota Esele comunicó también al Subcomité que cuando se supo su inminente llegada todos los bubis de Fernando Poo residentes en Santa Isabel, San Fernando, San Carlos y cuarenta y dos poblados, así como en comunidades agrícolas aisladas, habían celebrado una reunión en Rebola el 18 de agosto de 1966. El acta de esta reunión figuraba en una comunicación con treinta y ocho firmas que el Sr. Esele presentó al Subcomité. En esta comunicación los autores expresaban su adhesión a la moción de separación presentada por los consejeros bubis, Sres. Aurelio Nicolás Itoha, Luis Maho Sicacha, Román Borico Toichoa y Gustavo Watson Buco, en una reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 12 y 13 de agosto de 1966. Dijeron que como los miembros de Río Muni constituían mayoría en la Asamblea General, se había hecho caso omiso sistemáticamente de las opiniones de los miembros de Fernando Poo. Además, la mayoría de los proyectos de obras públicas y mejoras se llevaba a cabo en Río Muni; mientras Fernando Poo aportaba el 81% de los ingresos, Río Muni era responsable del 83% de los gastos.

273. Los autores de la comunicación también reiteraron una resolución aprobada por ellos en una reunión celebrada en Santiago de Baney el 27 de agosto de 1964, en la que pedían la completa separación de Fernando Poo y Río Muni. En apoyo de esta solicitud decían que una inmigración ilimitada desde el exterior a Fernando Poo provocaría el hacinamiento, la escasez de tierra y el desempleo. Recordando que el Papa Juan XXIII, en su encíclica *Pacem in Terris*, había encarecido que se respetaran las minorías y que se fomentaran sus valores, dijeron que una inmigración ilimitada reprimiría la vitalidad y el desarrollo de los bubis. Sostenían que su reivindicación era conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Carta de la Organización de la Unidad Africana (OUA).

274. También recordaron que varios países, entre ellos Luxemburgo, Andorra, Lichtenstein y Mónaco, tenían menos extensión que Fernando Poo, lo cual no les impedía ser Estados soberanos independientes. Si se accedía a su solicitud de completa separación de Fernando Poo y Río Muni, cada una de las entidades resultantes sería regida por su propia administración autónoma, sin perjuicio de la asistencia que

podieran desear prestarse una a otra. Para terminar, los autores de la comunicación dijeron que en cuanto Fernando Poo se separara de Río Muni, se establecería una comisión nombrada por el pueblo de Fernando Poo a fin de determinar, mediante negociaciones con España, la fecha de su independencia. A continuación, el Estado de Fernando Poo procedería a concertar los necesarios tratados de amistad con España en vista de los estrechos lazos que existían entre los dos países y en agradecimiento de la labor realizada por España.

275. El Sr. Santiago Sota Esele también dijo que los bubis apoyaban plenamente el memorando presentado por el Sr. Nicolás Itoha, Consejero de Trabajo, el 20 de agosto de 1966. En respuesta a algunas preguntas, el Sr. Santiago Sota Esele subrayó que los bubis deseaban la independencia, pero no antes de la separación económica y administrativa de Fernando Poo y Río Muni. De no ser así, podrían surgir graves dificultades análogas a las que existían en otras partes de África. Además, los cinco miembros del Consejo de Gobierno de Río Muni, entre ellos el Presidente, podían prevalecer sobre los cuatro miembros bubis de Fernando Poo en la votación de cualquier cuestión. Existía un auténtico peligro de que los 200.000 habitantes de Río Muni desatendieran cada vez más los intereses de los 18.000 bubis de Fernando Poo. La Provisencia misma había segregado a la humanidad en grupos étnicos y no era de suponer que el hombre fuera más sabio. Los bubis querían estar en situación de proteger a sus familias, sus bienes y sus medios de vida una vez que se alcanzara la independencia. Les había decepcionado la administración autónoma porque dedicaba una cantidad desproporcionada de atención y gastos a Río Muni.

276. El 1º de agosto de 1966 el Subcomité celebró una nueva reunión en Moka con un grupo de trece bubis, también dirigidos por el Sr. Santiago Sota Esele, quien afirmó que representaban a todos los bubis de la región de Moka, incluidos San Carlos y los pueblos circundantes. El Sr. Esele se veía en la obligación de subrayar, habida cuenta de las acusaciones que se les habían dirigido, que los bubis eran la auténtica raza indígena de Fernando Poo y que sus intereses debían tener primacía en todos los asuntos relacionados con su país.

277. El Sr. Juan Balboa Boneke comunicó al Subcomité que las opiniones de los bubis figuraban en los documentos presentados al Subcomité el día anterior. Era el deseo de los bubis que los problemas internos del Territorio se resolvieran antes de llegar a la independencia. La solución de estos problemas consistía en la separación de Fernando Poo y Río Muni. Si no se llegaba a esta solución, se produciría un conflicto y habría derramamiento de sangre. Para los bubis era cuestión de preservar su integridad. Después de la separación negociarían el asunto de la independencia con España.

278. El Sr. Dionisio Sila dijo que correspondía a la población autóctona de Fernando Poo determinar su propio porvenir. El Gobierno español era el que había impuesto una falsa unidad a las dos partes del Territorio. Los bubis consideraban esencial que se alcanzara la independencia en condiciones de paz y prosperidad, pero existía peligro de conflicto en el momento actual, puesto que les empujaba a una posición de inferioridad un pueblo que había venido a Fernando Poo como su huésped. Estaban a favor de las negociaciones con España respecto de la independencia, aunque el Sr. Sila compartía la opinión de que debían resolverse primero los problemas internos del Territorio.

279. El 21 de agosto de 1966 el Subcomité recibió una comunicación del Sr. Primo Mbomio Nso, en la que figuraba una queja sobre el predominio de la discriminación racial en el Territorio. Según el Sr. Mbomio Nso, los españoles habían venido a la Guinea Ecuatorial para aprovecharse de las riquezas del Territorio y habían empleado al pueblo como instrumento para alcanzar sus ambiciones y deseos, sin que les importaran la situación económica y el bienestar de la población. En su comunicación el Sr. Mbomio Nso también dijo que el trabajador indígena que llevaba en una empresa de cinco a ocho años ganaba un salario más pequeño que el español recién llegado, aunque el primero trabajaba más que el segundo. Además, había dos escalas de remuneración en el Terri-

torio, una para el trabajador español y otra para el indígena. La comunidad española no había hecho nada en el Territorio para el desarrollo industrial. La población indígena se alojaba en viviendas miserables mientras que los residentes españoles vivían en casas confortables. En conclusión, afirmaba que el pueblo español había hecho mucho daño al pueblo de Guinea Ecuatorial.

280. El 21 de agosto de 1966 el Subcomité recibió una comunicación de un grupo de trabajadores indígenas. En esta comunicación se quejaban de que el trabajador español recibía un sueldo de 10.000 pesetas con derecho a casa, muebles, etc., mientras que el indígena recibía solamente 1.700 pesetas sin derecho a nada. Ni siquiera se daba a los indígenas la oportunidad de quejarse de las condiciones de trabajo. Después de 188 años de dominio de España el Gobierno español no había hecho nada que pudiera servir de ejemplo para el Territorio si llegaba a ser independiente. Poco después del establecimiento del régimen autónomo, el Gobierno español había hecho toda clase de promesas que nunca se cumplieron, y muchos indígenas que se oponían a las autoridades españolas arriesgaban la vida. Las autoridades españolas habían tratado al pueblo como esclavo en su propio país. Esta situación evidentemente tenía por objeto hacer imposible que alcanzase la independencia.

281. El 21 de agosto de 1966 se presentó al Subcomité una nueva comunicación con treinta firmas en nombre de los fangs residentes en el distrito de San Carlos. En esta comunicación, los autores relataban cómo en 1915 se exportaron trabajadores indígenas de Río Muni a Fernando Poo para proporcionar la mano de obra necesaria a la explotación de la isla. Desde entonces se había desarrollado una cooperación mutua de todo género entre los habitantes de las dos partes del Territorio. Su aceptación de la unidad de Fernando Poo y Río Muni había quedado incorporada en la actual Ley de Bases. Los autores estaban, por lo tanto, muy sorprendidos de que los Consejeros de Sanidad y Beneficencia, Información y Turismo, Trabajo, Industria y Minas hubieran presentado una moción a favor de la separación económica y administrativa de las dos partes del Territorio, incluso antes de terminar la actual administración y sin tener la menor idea de las consecuencias de esta medida.

282. Los fangs residentes de Fernando Poo estaban allí solamente para servir al país. Era de notar que también había cientos de trabajadores y residentes de otras partes. Se encontraban como en su casa y tenían, por lo tanto, derecho a la libertad de residencia. Según los autores, el país estaba al borde del caos económico y éste era el motivo de los recientes disturbios. Si a los bubis de Fernando Poo les importara realmente el interés de su país, pedirían al Subcomité que tomara medidas para que se les prestara asistencia económica, puesto que por falta de medios financieros y técnicos no se habían desarrollado los recursos del país. Para terminar, los autores decían que, lejos de ayudar al país, la separación de Fernando Poo y Río Muni contribuiría a su ruina.

G. Reuniones con miembros de la Diputación Provincial de Río Muni

283. En una reunión celebrada con miembros de la Diputación Provincial de Río Muni, el 22 de agosto de 1966, el Presidente leyó una declaración que tenía preparada, en nombre de los miembros de la Diputación. En la declaración los miembros de la Diputación Provincial declaraban su deseo de independencia con ayuda económica y militar de España. Sólo de esta manera podían garantizarse la paz y la seguridad del Territorio. La experiencia de los dos últimos años les había enseñado, en primer lugar, que era difícil para una pequeña nación vivir en el aislamiento, en segundo lugar, que sería preferible tener un mayor grado de libre determinación, y en tercer lugar, que el Gobierno español, a su juicio, tenía grandes deseos de atender a sus propuestas. Por estas razones, consideraban que había llegado el momento de negociar con España las condiciones de la independencia de la Guinea Ecuatorial.

284. En respuesta a preguntas hechas en una reunión celebrada el 23 de agosto de 1966, recordaron que la Asamblea General había aprobado previamente una moción en la que se pedía el cambio del régimen autónomo y que se esperaba que el Presidente de dicho órgano nombrara un grupo de estudio para examinar las consecuencias de dicha moción y presentar un informe al respecto. Uno de los motivos de su deseo de independencia era que con ella el Territorio podría aprovechar la asistencia de las Naciones Unidas y de otros órganos internacionales. Además, este deseo era independiente de la buena o mala disposición del Gobierno español en lo relativo a la continuación de la asistencia económica. El momento actual era adecuado para comenzar las negociaciones sobre la independencia. Después de estas negociaciones preveían un plebiscito sobre una constitución para el país una vez independizado y señalaban que el recuento de los votos debía hacerse en todo el Territorio y no en las diferentes partes que lo componían.

285. Refiriéndose a la situación del Territorio, dijeron que había solamente seis médicos indígenas en todo el Territorio, cuatro de los cuales se encontraban en Río Muni. En cuanto a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, algunos de ellos la conocían por sus compatriotas en el Gabón y el Camerún; otros no la conocían y deseaban conseguir algunos ejemplares del texto.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

286. De conformidad con sus atribuciones y previa comprobación de la situación del Territorio con vistas a acelerar la aplicación de las resoluciones 1514 (XV) y 2067 (XX), aprobadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960 y el 16 de diciembre de 1965, respectivamente, el Subcomité de Guinea Ecuatorial ha llegado a las conclusiones siguientes:

287. El Gobierno de España ha declarado en varias ocasiones que concedería la independencia al Territorio cuando la población lo pidiera. Dichas declaraciones han dado pie a la idea, extendida entre la población, de que el actual régimen autónomo representa la última etapa de una evolución constitucional hacia la independencia completa.

288. Sin embargo, las esperanzas que la población tenía de participar activamente durante la presente etapa en el gobierno y dirección de sus propios asuntos no se han visto realizadas. El régimen autónomo tampoco satisface a algunos miembros del Consejo de Gobierno. El Comisario General y el Gobierno español siguen teniendo en sus manos y ejerciendo la mayoría de los poderes. Ni el Consejo de Gobierno ni la Asamblea General de Guinea Ecuatorial ejercen el poder efectivo, incluso dentro del ámbito de su competencia.

289. El sistema electoral que, además de ser indirecto, se basa fundamentalmente en la representación corporativa selectiva y, en menor grado, en el voto de los jefes de familia por intermedio de los concejos municipales, limita la participación en la elección de representantes para los órganos gubernamentales a sólo una pequeña minoría de la población adulta. Por ello, dichos órganos distan mucho de ser representativos de la población en general y de reflejar su voluntad y deseo libremente expresados. A este respecto, el Subcomité señala que existe entre la población un gran apoyo por el sistema de elecciones directas basadas en el sufragio universal de los adultos.

290. Si bien los habitantes han podido comparecer ante el Subcomité como peticionarios, hay pruebas de que la libertad de realizar actividades políticas está restringida. Los partidos políticos no están reconocidos oficialmente. Se demostró asimismo que las personas que expresaban opiniones políticas no gratas a la Potencia Administradora se exponían a vejaciones. Algunos peticionarios se quejaron de que la presencia de fuerzas militares españolas en el Territorio ejercía un efecto intimidatorio sobre la población. También se presentaron pruebas de que en la administración de la justicia, especialmente

de la penal, había desigualdades en detrimento de los africanos.

291. Hay varias tendencias en favor de la separación entre Fernando Poo y Río Muni en ciertas materias presupuestarias y administrativas. No obstante, tales opiniones sólo son defendidas por una pequeña minoría entre los bubis de Fernando Poo y por algunos intereses creados. Esas tendencias no son compartidas por la inmensa mayoría de la población ni por ninguno de los principales partidos políticos. Además, la mayoría de la población desea que el Territorio obtenga la independencia como una sola entidad.

292. De las consultas celebradas por el Subcomité con la población se desprende claramente que hay unanimidad entre todos los sectores de la población en favor de la independencia sin demora. Esa opinión es compartida por los diversos partidos políticos así como por la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, incluido el Presidente. Hay asimismo un deseo unánime de que las negociaciones con el Gobierno español para transmitir todos los poderes a la población del Territorio comiencen inmediatamente.

293. Recordando que el Gobierno español se ha comprometido a conceder la independencia al Territorio cuando la población lo pida, los órganos, grupos e individuos con quienes el Subcomité mantuvo conversaciones presentaron varias sugerencias en cuanto a la fecha en que debía concederse la independencia al Territorio. Dichas sugerencias iban desde la independencia inmediata a la independencia final del mandato del actual Consejo de Gobierno en julio de 1968.

294. En vista de lo anterior resulta evidente que la inmensa mayoría de la población del Territorio desea la independencia a más tardar en julio de 1968. La fijación de una fecha concreta parecería depender, sin embargo, del resultado de una conferencia entre la Potencia Administradora y los diversos partidos políticos del Territorio y todos los sectores de la población. De los testimonios recogidos por el Subcomité resulta también claro que la mayoría de la población desea que las Naciones Unidas participen en el proceso preparatorio de la independencia del Territorio.

295. En cuanto a las condiciones económicas, el Subcomité observó que la economía del Territorio depende fundamentalmente del cacao y del café y se caracteriza por una falta de diversificación. Ahora el Gobierno español admite que la situación no es satisfactoria.

296. Aunque el Gobierno español ha incrementado en los últimos años su ayuda a la Guinea Ecuatorial mediante la protección de sus principales productos de exportación, sus aportaciones al presupuesto y al sostenimiento de los programas económicos y sociales de la región y las medidas adoptadas por él en materia de desarrollo económico han sido lentas e inadecuadas, sobre todo en la parte continental del Territorio. El Subcomité observó que la mayor parte del comercio del Territorio se hallaba en manos de extranjeros. Asimismo observó que en ningún momento había emprendido la Potencia Administradora medidas eficaces para reducir la dependencia económica del Territorio con respecto a España y permitirle conseguir un desarrollo económico rápido y equilibrado. Además, el Subcomité tomó nota complacido de la declaración del Gobierno español, de que seguiría prestando asistencia a la Guinea Ecuatorial incluso después de que el Territorio obtuviese la independencia.

297. En varias peticiones y declaraciones de peticionarios se indicó la necesidad de una reforma del régimen de tenencia de tierras en el Territorio. Se señaló que el sistema vigente no sólo era desfavorable para la población autóctona, sino que también tendía a favorecer la propiedad de tierras por nacionales y compañías españoles expatriados. El actual sistema de subastas, que se celebran en Madrid, favorece a los compradores de tierra más ricos y va en perjuicio de la población autóctona. Por otra parte, en muchos casos se ha logrado eludir las disposiciones legales que limitan la adquisición permisible de bienes raíces por una persona o sociedad.

298. En cuanto a las condiciones laborales, la actual legislación favorece a los nacionales españoles expatriados con

preferencia a los trabajadores africanos. Hay una gran disparidad entre los salarios y demás condiciones de trabajo de los trabajadores españoles y africanos. La mayor parte de los puestos de autoridad y responsabilidad de la administración pública y del sector privado son desempeñados por españoles expatriados. No se permite la constitución de sindicatos que representen a los trabajadores ante los empleadores.

299. En lo tocante a las condiciones educacionales, el Subcomité observó que, a pesar de las medidas últimamente adoptadas por la Potencia Administradora, había escasez de instituciones docentes y, en especial, de centros de enseñanza secundaria y superior, así como de personal docente. Por lo tanto, las oportunidades de educación en el Territorio eran limitadas. Al propio tiempo, el número de estudiantes enviados desde el Territorio para cursar estudios superiores o enseñanzas técnicas en el extranjero era insuficiente para las necesidades del Territorio.

B. Recomendaciones

300. A la luz de las conversaciones celebradas con la Potencia Administradora y con las autoridades autónomas, las pruebas recibidas y las conclusiones expuestas anteriormente, el Subcomité considera que el Comité Especial debe formular las recomendaciones siguientes:

301. Que la Potencia Administradora convoque inmediatamente una conferencia constitucional en la que estén representados plenamente los diversos partidos políticos del Territorio y todos los sectores de la población, con objeto de establecer las modalidades de la transferencia inmediata de todos los poderes al pueblo y de fijar una fecha para la independencia que, en respuesta a los deseos de la población, no sea posterior a julio de 1968.

302. Que entretanto la Potencia Administradora emprenda el rápido traspaso de los poderes gubernamentales efectivos a los representantes del Territorio.

303. Que la Potencia Administradora elimine toda restricción de las actividades políticas e instaure en su plenitud las libertades democráticas.

304. Que la Potencia Administradora sustituya el actual sistema electoral por otro basado en el sufragio universal de los adultos, y que se celebren elecciones sobre estas bases antes de la independencia.

305. Que la Potencia Administradora establezca, en la ley y en la práctica, la plena igualdad de derechos políticos, económicos, sociales y de otra índole, y especialmente:

a) Reforme la legislación y las prácticas relativas al régimen de tenencia de tierras, teniendo presente el principio de que los intereses del pueblo del Territorio están por encima de todo;

b) Reforme la legislación y las prácticas relativas a las condiciones laborales para promover los intereses de los trabajadores africanos y garantizar el respeto del principio de salario igual por trabajo igual;

c) Permita la constitución de sindicatos representativos que defiendan y promuevan los intereses de los trabajadores;

d) Garantice la aplicación equitativa de la ley, sin consideraciones de raza, creencia o color.

306. Que la Potencia Administradora intensifique su asistencia al Territorio y adopte medidas efectivas para la diversificación económica equilibrada y el rápido desarrollo económico del Territorio.

307. Que el Comité Especial emprenda un estudio, en consulta con la Potencia Administradora y con representantes de la Guinea Ecuatorial, sobre el mejor modo de garantizar la asistencia de los organismos especializados, sobre todo en lo que respecta a la diversificación económica, la educación y la sanidad.

308. Que la Potencia Administradora establezca en el Territorio instituciones de enseñanza secundaria y superior y

acelere la aplicación de programas de formación adecuados a las necesidades urgentes de la Guinea Ecuatorial, incluso la formación de africanos en varias esferas de la administración y para cargos de elevada responsabilidad.

309. Que la Potencia Administradora siga cooperando con las Naciones Unidas garantizando la participación de éstas en los procesos conducentes a la independencia del Territorio.

310. Que la Potencia Administradora emprenda una distribución en gran escala del presente informe sobre la Guinea Ecuatorial y la difusión, en el Territorio, de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General), así como de la documentación pertinente sobre la labor del Comité Especial.

V. APROBACIÓN DEL INFORME

311. El Subcomité aprobó este informe por unanimidad, en la 13a. sesión, que celebró en la Sede el 18 de octubre de 1966.

Apéndice I

Itinerario y programa de reuniones

Miércoles 17 de agosto de 1966

- Mañana:** Llegada a Madrid.
Entrevista con el Director General de Plazas y Provincias Africanas, Presidencia del Gobierno, y otros altos funcionarios.
Entrevista con el Secretario Nacional de la Organización Sindical Española, el Vicesecretario Nacional de Ordenación Económica y otros altos funcionarios.
- Tarde:** Entrevista con el Subcomisario del Plan de Desarrollo Económico y Social y con el Secretario de la Comisión para el Desarrollo Económico de Fernando Poo y Río Muni
Visita al Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África.

Jueves 18 de agosto

- Mañana:** Entrevista con el Subsecretario y otros altos funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Visita al Centro Número 1 de Formación Profesional Acelerada.
- Tarde:** Salida de Madrid.

Viernes 19 de agosto

- Mañana:** Llegada a Santa Isabel, Fernando Poo, Guinea Ecuatorial.
Entrevista con el Presidente y miembros de la Asamblea General.
- Tarde:** Entrevista con el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno.
Reunión con representantes del Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial (MONALIGE).

Sábado 20 de agosto

- Mañana:** Entrevista con el Comisario General.
Visita al Hospital de Santa Isabel.
Entrevista con el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno.
- Tarde:** Reunión con representantes del MONALIGE.
Entrevista con el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno.
Reunión con representantes de los bubis.

Domingo 21 de agosto

- Mañana:** Salida de Santa Isabel.
Llegada a Moka (centro de Fernando Poo).
Entrevista con representantes de los bubis.
Salida de Moka.
Visita a San Carlos (centro de Fernando Poo).
Llegada a Santa Isabel.
- Tarde:** Entrevista con representantes del MONALIGE.
Reunión con representantes del Movimiento de Unificación Nacional de la Guinea Ecuatorial (MUNGE).
Entrevista con el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno.

Lunes 22 de agosto

- Mañana:** Salida de Santa Isabel.
Llegada a Bata (Río Muni).
- Tarde:** Entrevista con el Presidente y miembros de la Diputación Provincial.
Reunión con representantes de la Junta del MUNGE y de la Idea Popular de la Guinea Ecuatorial (IPGE).
Reunión con representantes del MONALIGE.

Martes 23 de agosto

- Mañana:** Entrevista con el Gobernador Civil.
Entrevista con el Presidente y miembros de la Diputación Provincial.
- Tarde:** Reunión con representantes de MONALIGE.
Entrevista con el Comisario General y otros funcionarios españoles.

Miércoles 24 de agosto

- Mañana:** Salida de Bata.
Llegada a Santa Isabel.
Entrevista con el Presidente del Consejo de Gobierno.
Salida de Santa Isabel.

Apéndice II

Representantes de las corporaciones y de las cooperativas elegidos para los concejos municipales

Fernando Poo

	Número de representantes
Annobón:	
Corporaciones y cooperativas	2
San Carlos:	
Corporaciones	2
Cooperativas	2
San Fernando:	
Corporaciones y cooperativas	3
Santa Isabel:	
Corporaciones	3
Cooperativas	2

Río Muni

Acurenam:	
Corporaciones y cooperativas	3
Bata:	
Corporaciones	4
Cooperativas	1

Apéndice III

	Número de representantes	Representantes de cabezas de familia elegidos para los concejos municipales	Número de representantes
Ebebiyín:			
Corporaciones y cooperativas	5		
Evinayong:		Fernando Poo	
Corporaciones y cooperativas	4		
Micomeseng:		Annobón	2
Corporaciones y cooperativas	4	San Carlos	4
Mongomo de Guadalupe:		San Fernando	3
Corporaciones y cooperativas	4	Santa Isabel	5
N'sork:		Río Muni	
Corporaciones y cooperativas	3	Acurenám	3
Puerto Iradier:		Bata	5
Corporaciones y cooperativas	4	Ebebiyín	5
Río Benito:		Evinayong	4
Corporaciones y cooperativas	4	Micomeseng	4
Sevilla de Niefang:		Mongomo de Guadalupe	4
Corporaciones y cooperativas	4	N'sork	3
Valladolid de los Bimbiles:		Puerto Iradier	4
Corporaciones y cooperativas	4	Río Benito	4
		Sevilla de Niefang	4
		Valladolid de los Bimbiles	4
TOTAL	58		58

Apéndice IV

Distribución del electorado (cabezas de familia) al nivel de los concejos municipales en 1964

Provincias y municipios	Población del municipio	Número de electores inscritos en los registros electorales	Número de electores votantes
<i>Fernando Poo</i>			
Annobón	1.881	421	312
San Carlos	10.535	2.592	1.577
San Fernando	3.157	898	357
Santa Isabel	28.180	5.708	3.585
TOTAL	43.753	9.619	5.831
<i>Río Muni</i>			
Acurenám	9.280	1.853	1.724
Bata	25.760	8.583	5.381
Ebebiyín	31.752	7.640	5.929
Evinayong	18.509	4.661	4.397
Micomeseng	17.125	5.622	4.384
Mongomo de Guadalupe	12.039	3.062	2.711
N'sork	8.894	2.872	2.375
Puerto Iradier	12.118	3.289	2.245
Río Benito	12.792	4.404	2.518
Sevilla de Niefang	19.764	5.923	4.021
Valladolid de los Bimbiles	14.145	5.075	3.770
TOTAL	182.178	52.984	39.455
TOTAL de la Guinea Ecuatorial (municipios)	225.931	62.603	45.286

CAPÍTULO X*

IFNI Y EL SAHARA ESPAÑOL

A. MEDIDAS ADOPTADAS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ ESPECIAL Y LA ASAMBLEA GENERAL

1. En 1964, el Comité Especial examinó la cuestión de Ifni y el Sáhara Español y aprobó una resolución que figura en el informe del Comité Especial a la Asamblea en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. IX, párr. 112). En las sesiones que celebró en 1965, el Comité Especial no examinó esos territorios, pero incluyó información sobre ellos en el informe que presentó a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1², cap. X).

2. En su vigésimo período de sesiones, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2072 (XX). La resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Habiendo considerado los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales referentes a Ifni y el Sáhara Español,

"Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales contenida en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960,

"Considerando que la Declaración se inspira en el vivo deseo de la comunidad internacional de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas,

"1. Aprueba lo dispuesto en la resolución referente a Ifni y al Sáhara Español aprobada el 16 de octubre de 1964 por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"2. Pide encarecidamente al Gobierno de España, como Potencia Administradora, que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los Territorios de Ifni y del Sáhara Español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos Territorios;

"3. Pide al Comité Especial que informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones;

"4. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a la Potencia Administradora."

3. El 10 de junio de 1966 el Secretario General transmitió esta resolución a la Potencia Administradora.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS³

1. IFNI

Generalidades

4. Los habitantes musulmanes del Territorio se rigen por sus propias leyes civiles, siendo los Tribunales Chéránicos los que entienden en materias civiles y laborales con rango de Juzgados Territoriales. Están dichos habitantes exentos del servicio militar, pero pueden incorporarse voluntariamente al ejército y a la policía y obtener en ellos empleo de oficial.

5. Los autóctonos del Territorio tienen acceso a los órganos de la administración municipal en las mismas condiciones que sus convecinos europeos; en la actualidad tres de los concejales son musulmanes.

6. En materia de salarios no existe discriminación por razón de pertenencia a grupos étnicos o sociales. La legislación laboral en vigor señala que las remuneraciones de los trabajadores autóctonos serán las que correspondan a su propia profesión y categoría laboral, teniendo derecho a los beneficios por razón de cargas familiares, carestía de vida, vacaciones retribuidas, seguros de enfermedad y accidente y los demás beneficios de la seguridad social.

Sanidad y beneficencia

7. Para la asistencia sanitaria, hay una red de dispensarios asistidos por personal médico, auxiliar sanitario y subalterno, y con un hospital (dotado actualmente de 200 camas), que cuenta, entre otras, con las especialidades de medicina general, cirugía general, traumatología, ginecología, puericultura y pediatría. En el año actual se procederá a una ampliación del hospital en la que se establecerá un nuevo complejo quirúrgico con dos quirófanos y permitirá aumentar el número de camas disponibles.

8. En 1965 se han dedicado a los servicios de sanidad 12 millones de pesetas⁴.

9. Los servicios de maternidad del hospital vienen siendo utilizados por un creciente número de mujeres musulmanes, que ingresan en él para tener allí sus hijos.

10. En el hospital provincial conviven los enfermos de ambas religiones sin más diferencia que en lo que a alimentación se refiere, en la que se respetan los preceptos coránicos.

11. La medicina preventiva desarrolla campañas periódicas de vacunación y saneamiento de viviendas y locales de reunión.

12. En la residencia "Gobernador Artalejo", inaugurada a principios de año, viven y son atendidos médicamente aquellos que por su edad, soledad familiar o incapacidad física han elegido voluntariamente ingre-

* Distribuido anteriormente con la signatura A/6300/Add.7.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² Ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información presentada en esta sección ha sido tomada de la información que, en virtud del inciso c del Artículo 73 de la Carta, ha transmitido España el 28 de junio de 1966.

⁴ La moneda local es la peseta española, que equivale a 0,0168 de dólar de los Estados Unidos.

sar en ella. Esta obra, con capacidad actual para 40 residentes y cuya ampliación está prevista, ha importado 2.500.000 pesetas.

13. Otra obra asistencial reciente ha sido la creación de la Organización de Ciegos, facilitando un medio digno de vida para los invidentes que se encontraban imposibilitados de ganar su sustento por otros medios.

14. Entre las obras de justicia social realizadas en Ifni, se señala el pago de pensiones por retiro o viudedad, que en 1965 rebasó los 5.500.000 pesetas.

Enseñanza

15. Además de las escuelas de primera enseñanza de ambos sexos, hay un gran número de escuelas coránicas, subvencionadas por la administración local, a las que asisten los alumnos cuyos padres así lo desean. En el curso 1966-1967 empezarán a funcionar dos nuevos grupos escolares, ya construidos, con capacidad de 180 alumnos cada uno de ellos y probablemente un nuevo grupo escolar de párvulos con cinco aulas.

16. En estos centros de enseñanza se facilita, además del complemento alimenticio de un vaso de leche a cada alumno, la comida del mediodía a gran parte del alumnado.

17. Para la segunda enseñanza existe un instituto nacional, creado en 1963, y que ha sustituido al Centro de Enseñanza Media que venía funcionando en el territorio desde hace 20 años. En él siguen los estudios los alumnos que desean realizar posteriormente estudios universitarios.

18. Para atender las necesidades de la población escolar que no desee realizar posteriormente estudios universitarios, existe una escuela laboral en la que actualmente cursan sus estudios 156 alumnos. La construcción de un nuevo edificio para su instalación en 1962 costó 3.500.000 pesetas.

19. Estudios más allá del nivel secundario se realizan fuera del Territorio, y para ello se conceden becas. Actualmente son 74 los alumnos beneficiarios de estas becas.

20. Hay también una escuela de iniciación agropecuaria, en la que los alumnos próximos a la terminación de su período escolar se inician de modo teórico y práctico en las enseñanzas correspondientes a esta modalidad laboral.

Obras públicas

21. En el ejercicio económico último, la subvención al presupuesto local fue de 29 millones de pesetas.

22. Con cargo a los fondos del Estado, se ha construido un nuevo embarcadero, venciendo las dificultades naturales que ofrece la zona costera. Para ello se ha construido un puerto-isla que está unido con tierra por un teleférico. La realización de las obras ha importado 210 millones de pesetas.

Economía

23. El presupuesto del Territorio, que en 1964 ascendió a 65 millones de pesetas, se elevó a 85 millones en el presente año. Esta cantidad no incluye los suplementos de crédito y créditos extraordinarios.

24. En la agricultura se vienen realizando obras de mejoramiento que permitan su revalorización. Estas obras han permitido obtener frutos de tierras hasta hace poco sin más cultivo que la cebada. Realizadas con cargo a los fondos del Estado, llevan consigo, previa la conformidad de los propietarios, una concentración parcelaria creándose al propio tiempo hermandades de labradores para la explotación de las fincas en régimen de cooperativas.

25. También se ha prestado atención a la construcción de viviendas. Recientemente se ha terminado un polígono con 464 casas cuyo importe total es de 160 millones de pesetas. El Territorio contribuyó, por su parte, con 13.500.000 para sufragar los gastos de vías para unión con el casco urbano, adquisición de solares, y conducción de energía eléctrica y agua potable. Está en construcción otro poblado en Id U Faqueh, del que ya están para entregar 12 viviendas y la mezquita.

Comunicaciones

26. Las comunicaciones aéreas del territorio con el exterior están aseguradas por la Compañía Iberia, y las marítimas, mediante convenio con una compañía naviera. La red de comunicaciones terrestres permite el enlace con todos los poblados del campo.

2. SAHARA ESPAÑOL

27. El Sáhara Español tiene una población de 25.000 personas, nómada en su mayoría, dedicada al pastoreo. Esfuerzo de mayor significación llevado a cabo en el Territorio, informa la Potencia Administradora, ha sido estabilizar y fijar poco a poco esa población y crear las condiciones mínimas indispensables para hacer un censo e ir levantando sobre esos cimientos iniciales los primeros órganos de administración y de gobierno.

Aspectos político-sociales

28. Como órgano supremo de la Administración, funciona el Gobierno General, de índole civil, y como instrumentos de carácter ejecutivo, los servicios de enseñanza, sanidad, obras públicas, arquitectura, telecomunicación, minería, hacienda y trabajo.

29. En el orden local, se han establecido un Cabildo, que preside actualmente Seila Uld Abeida Uld Sid Ahmed, y Ayuntamientos en El Aaiún y Villa Cisneros, cuyo Alcalde es Suilem Uld Abdelahe Uld Ahmed Brahim, así como entidades locales menores en Smara y Güera. Existen también fracciones nómadas, que tienen un carácter especial, ya que reúnen a los saharauís que, por dedicarse al pastoreo, no pueden tener participación en los organismos municipales.

30. Los componentes de estos organismos son nombrados directamente por la población o a través de las corporaciones, industria, comercio y profesiones liberales. En todos ellos, con excepción de las fracciones nómadas, está representada la comunidad cristiana, aunque en proporción muy inferior a la musulmana, ya que su volumen total en la población es bastante menor a la de esta última. La Justicia Coránica entiende con absoluta autonomía de las cuestiones suscitadas entre musulmanes, cuyas leyes escritas o consuetudinarias se aplican íntegramente.

31. Existe libertad religiosa. Se han construido mezquitas por cuenta del Estado español, que también su-

fraga las nóminas de los faquires y profesores de Corán. Anualmente se patrocina la peregrinación a la Meca de los musulmanes saharauís.

32. En el aspecto social deben mencionarse los dispensarios de puericultura y jardines de la infancia establecidos, habiéndose prácticamente terminado, según la información recibida, con la gran mortalidad infantil que impedía el crecimiento de la población nómada. La educación primaria se proporciona mediante la enseñanza oficial, ampliamente extendida por el desierto. Existen establecimientos de enseñanza media y la superior se atiende mediante becas. En el Sáhara se aplica el sistema de seguridad social vigente en España, que garantiza un salario mínimo, un subsidio de paro en caso de desocupación, así como atenciones sanitarias y pensiones de vejez e invalidez. Ello en un marco de igualdad entre cristianos y musulmanes.

33. El nomadismo va cediendo paso a la sedentarización, a medida que con el desarrollo del Territorio van creándose núcleos urbanos, y con ello puestos de trabajo. El territorio tiene en la actualidad ciudades, como El Aaiún y Villa Cisneros, en las que recientemente se han edificado 1.447 viviendas. En el interior del Desierto se han ido formando núcleos urbanos, algunos importantes como Smara, Auserd, en lo más íntimo del desierto, Güera, puerto de la parte meridional, y otros de menor importancia. En todos ellos se dispone de luz eléctrica, agua, escuelas, dispensarios, etc.

34. Un consejo asesor, del que forman parte las autoridades, los servicios técnicos de la administración y la población nómada, representada por sus jefes tradicionales, ha sido recientemente establecido para llevar a cabo un plan de desarrollo del territorio.

Sanidad y beneficencia

35. Existen clínicas de maternidad, con especialistas titulados al frente, en los hospitales de El Aaiún y Villa Cisneros. En los poblados del interior esta asistencia la prestan los facultativos de medicina general, con posibilidad de evacuación en las ambulancias de que dispone el Servicio de Sanidad, o en aviones, para los casos que requieran intervención de los especialistas.

36. Hay también dispensarios de puericultura en las dos ciudades mencionadas, bajo la dirección de especialistas en la materia. Son evacuados a estos centros los niños de los poblados del interior que no pueden ser asistidos con los medios y conocimientos normales. Para garantizar este servicio, se pasa periódicamente reconocimiento en todas las escuelas.

37. Para los pacientes adultos funciona un hospital general en El Aaiún, dotado de las especialidades propias de estos centros (radiología, análisis clínicos, cirugía, medicina interna, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, etc.). En Villa Cisneros existe un hospital comarcal, donde se prestan iguales servicios, si bien es más reducido en lo que se refiere al número de camas.

38. En los poblados de Smara, Auserd y Güera, el servicio sanitario se ejerce por medio de dispensarios-enfermerías, bajo la dirección de facultativos titulados. Estos dispensarios están dotados de veinte camas cada uno y sirven de primer escalón de evacuación de los dispensarios rurales. En los demás poblados de menor importancia funcionan dispensarios servidos asimismo por facultativos que prestan la asistencia con carácter ambulatorio.

39. Para las evacuaciones al primer escalón (dispensarios-enfermerías de Smara, Auserd y Güera) y al segundo (hospitales de El Aaiún y Villa Cisneros), dispone el Servicio de Sanidad del territorio de un tren de ambulancias y, en caso de máxima urgencia, de aviones.

40. El Sáhara Español cuenta con los centros médicos siguientes: un hospital provincial, en El Aaiún (con 150 camas), un hospital comarcal en Villa Cisneros (con 50 camas) y un hospital en Güera; 2 dispensarios infantiles (en El Aaiún y Villa Cisneros); 2 dispensarios ambulatorios; 2 clínicas de maternidad y un dispensario-enfermería en Smara y otro en Auserd, cada uno con 20 camas. Hay, además, un dispensario en cada uno de los poblados de Hausa, Echdeiría, Mahbes, Hagunía, Bojador, Guelta Zemmur, Bu Craa, Tichla y Bir N'Zarán, y un puesto sanitario en cada uno de los poblados de Edchera, El Farsia, Agracha y Aguenit.

41. El jefe de los servicios de sanidad es un médico como también son los directores de los hospitales de El Aaiún y Villa Cisneros. Para el servicio de los centros se cuenta con el personal siguiente: 10 médicos especialistas para los hospitales; 2 farmacéuticos para los mismos; 15 médicos para los dispensarios ambulatorios urbanos y rurales; 40 auxiliares técnicos sanitarios, del cuerpo nacional de sanidad; 50 sanitarios titulados; 20 enfermeras religiosas y personal subalterno y de limpieza.

42. Por lo que respecta a la beneficencia, existe un subsidio de paro al que tienen derecho todos los saharauís que no tienen una colocación remunerada (en la actualidad los desocupados no pasan de 200). Y para los incapacitados y niños desvalidos, se dispensan raciones alimenticias mensuales, que les permiten vivir con un mínimo decoro. En la actualidad se hallan proyectados y dotados de crédito albergues para estos necesitados, que gozarán de completa atención mediante un régimen de internado.

Enseñanza

43. En los hogares de la infancia, que funcionan en El Aaiún y Villa Cisneros, se admiten los niños de 2 a 6 años, en régimen de seminternado. Los niños reciben alimentación y vestido. En 1965, el número de niños en estos Hogares era de 300 y el de maestros 10.

44. La enseñanza primaria se da en grupos escolares y escuelas unitarias. Estas escuelas se construyen allí donde haya un grupo de 30 alumnos como mínimo. Con el fin de que ningún niño saharauí carezca de oportunidad para instruirse, se han instalado escuelas portátiles, que siguen a los grupos de nómadas en su busca de pastos para el ganado. A todos los alumnos se les viste, calza y alimenta mediante roperos y comedores escolares. En 1965, había 10 grupos escolares, 12 escuelas unitarias y 6 escuelas ambulantes. En dicho año había 57 maestros nacionales y 29 maestros de Hassanía y Corán. La matrícula total en primera enseñanza era de 2.200 alumnos.

45. La enseñanza secundaria se proporciona en los institutos de enseñanza media de El Aaiún y Villa Cisneros, centros a cargo del Estado, que en 1965 contaban con 466 alumnos y 32 profesores. Para la enseñanza superior los alumnos disponen de becas, no habiendo limitación en su número.

46. A los estudiantes saharauís cuya preparación no les permite el acceso a otras enseñanzas, se les proporciona capacitación profesional. Hasta el momento, esta capacitación se realiza o bien en el mismo territorio, mediante cursos de sanitarios, conductores mecánicos o trabajadores de la construcción, o mediante su integración en las escuelas especiales de formación profesional de la Península, en las que anualmente se capacitan por el procedimiento de formación profesional acelerada 60 alumnos. La existencia de esta labor formativa ha aconsejado el establecimiento en el propio territorio de escuelas profesionales, y en el momento actual se hallan proyectados y dotados de crédito, sólo pendientes de iniciación, centros en El Aaiún y Villa Cisneros.

Obras públicas

Urbanización

47. Las ciudades de El Aaiún y Villa Cisneros y los poblados de Smara y Güera cuentan con redes de vías públicas asfaltadas, y tienen redes de distribución de agua y alcantarillado. Los otros poblados, cuentan también con sus servicios de abastecimiento de agua y pequeñas centrales eléctricas.

Carreteras

48. Las de primer orden son: El Aaiún-Playa, con 25 km., Villa Cisneros-Aargub, 20 km., Güera-frontera mauritana, 4 km. Las de tercer orden son: El Aaiún-Dsora, 45 km., El Aaiún-Edchera, 30 km., El Aaiún-Smara, 180 km., Smara-Hauser, 20 km., Hausa-Edchera, 10 km., El Aaiún-Cabo Bojador, 80 km., Desviación de Guelta Zemmur, 26 km. Con estas carreteras se ha permitido el tráfico a través del desierto con los puntos cruciales. Son de cuatro metros de ancho y asfaltadas.

Puertos

49. El puerto de Villa Cisneros está dotado de todos los servicios para el tráfico marítimo; hay un pantalán de desembarcadero en El Aaiún; un desembarcadero en Güera; y un desembarcadero de mineral.

Aeropuertos

50. Hay un aeropuerto en El Aaiún, con pistas asfaltadas y apto para el tráfico de reactores tipo *Caravelle*; un aeropuerto en Villa Cisneros, de semejantes características y diversos campos de aterrizaje.

Economía

51. El déficit del presupuesto del Territorio, que representa el 80% de la cifra total presupuestada, se sufra con cargo al presupuesto general del Estado. Los escasos ingresos corresponden en su mayor parte a los rendimientos del trabajo personal de los funcionarios. Los naturales del Territorio no contribuyen con ningún impuesto.

52. La información transmitida por la Potencia Administradora señala que el carácter desértico del Territorio explica su pobreza económica. La escasa población descarta estímulo para el comercio; la ausencia de materias primas explica la de industrias; el suelo, en su mayor parte pedregoso y recubierto de arenales, no es apto para la agricultura ni para la ganadería, amén del

clima riguroso y la falta de agua; el subsuelo, con indicios de minerales, pero de dudosa explotación rentable, por las enormes distancias a los posibles puntos de embarque; las costas, en fin, con sus altos acantilados y la falta de abrigos naturales aptos para la construcción de puertos limitan decisivamente las posibilidades del tráfico y del establecimiento de flotas pesqueras.

53. Se está, sin embargo, trabajando para revalorizar el Sáhara, haciendo uso de toda posibilidad de riqueza. A continuación se describen brevemente los trabajos en curso.

Agricultura

54. Durante los últimos años, se vienen haciendo ensayos de cultivos en aquellas zonas en que la coincidencia de tierras vegetales y agua permiten abrigar alguna esperanza de viabilidad agrícola. En Villa Cisneros existe un centro experimental del que se obtienen excelentes verduras de toda especie para el abastecimiento local. Pero los trabajos en mayor escala se están realizando en la Comarca de Aargub, donde en el momento actual se preparan 150 hectáreas para ensayo de cultivos, especialmente cereales, pastos y huertas. Ello es posible merced al hallazgo de un gran manto de aguas subterráneas, que afloran por propia presión desde una profundidad de 450 metros. Si, como se espera, la experiencia es favorable, se podrán poner en cultivo hasta 5.000 hectáreas sólo en la zona sur del Territorio. Según la información recibida, no se pretende que la agricultura vaya a salvar su economía, pero sí contribuir al abastecimiento local y, sobre todo, se tiende a producir pastos que permitan sostener al ganado en los momentos de sequía pertinaz y agotamiento de los pastos naturales. También en la zona norte se están poniendo en cultivo huertas en lugares donde existe agua, pretendiéndose que a su amparo se asienten algunos cientos de familias, a base de consumir los productos y vender el excedente en los núcleos urbanos. Esta labor la está haciendo el Gobierno a sus expensas, y una vez preparadas las huertas, se entregan a las familias saharauís para su explotación, con la asistencia técnica de los servicios de agricultura.

Ganadería

55. Dependiente de la agricultura, no se pretende tampoco, según informa la Potencia Administradora, constituir en el desierto un emporio ganadero. Sus condiciones geográficas adversas excluyen la adaptación de especies que por su número y calidad pudieran permitir la exportación. Se trata de mantener la cabaña de ganado camellar en buenas condiciones, así como el ganado lanar y el cabrío, que tan bien se adaptan a este terreno, y aún intentar el arraigo de cebúes, cuya carne es más estimada que la del camello. Con ello y con el desarrollo de la agricultura en la forma antes dicha, se tiende a conseguir que la población nómada tenga asegurado a bajo costo su sustento.

Industria

56. La ausencia hasta ahora de materias primas transformables explica la casi total ausencia de industrias. Sin embargo, se está tratando de fomentar esta rama de la economía, aprovechando las posibilidades que ofrece la pesca. Terminado el puerto de Villa Cisneros, coincidiendo con la abundancia de agua potable

hallada en dicha zona, se abre la esperanza a la instalación de industrias derivadas de la pesca. En Güera funcionan ya dos fábricas de subproductos, y en Villa Cisneros existen proyectos de instalación de frigoríficos industriales, destinados a la congelación de la abundante pesca capturada en aquellas costas y su posterior exportación a los mercados de consumo.

Comercio

57. El comercio en pequeña escala es el único que existe en el Territorio.

Transporte

58. Los centros de población del Territorio están unidos por carreteras o pistas de fácil acceso a los vehículos, que han sustituido a los camellos como medio de transporte. Estas vías, que se han descrito en el párrafo 45, son unas veces carreteras asfaltadas, como ocurre con la de El Aaiún-Smara, con 180 km. Otras, en cambio, discurren sobre el propio terreno, que por su estado permite una marcha normal a los vehículos y sólo se construyen carreteras en aquellos tramos de suelo rocoso o arenoso que dificultarían el tráfico normal.

59. El tráfico marítimo está asegurado por medio de líneas regulares, con escalas en El Aaiún, Villa Cisneros y Güera. Contribuyen también al abastecimiento del territorio servicios discrecionales prestados por buques fletados al efecto.

60. La vía aérea, que es el más frecuente medio de comunicación entre el territorio y la Península, bien directamente, o a través de las Islas Canarias, está servida por dos Compañías aéreas, que aseguran tres servicios diarios, tanto con las Islas Canarias como con la Península. Además y durante la temporada de turismo en Canarias, se desplazan diariamente varios aviones de otra compañía.

Telecomunicación

61. Los servicios de telecomunicación que operan en el Sáhara son:

a) Una red radioeléctrica, que permite la comunicación desde El Aaiún, Villa Cisneros y los más importantes poblados del interior con el resto del mundo, con las modalidades de radiogramas, conferencias y giros telegráficos;

b) Una emisora de radiodifusión de 5 kilovatios, que permite una clara audición en todo el territorio, en las Islas Canarias, en el Sur de Marruecos y en los confines de Mauritania;

c) Un poste repetidor de televisión, que permite la recepción de las emisiones de la televisión de Canarias.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

62. El Comité Especial examinó las cuestiones de Ifni y el Sáhara Español en sus sesiones 435a. y 436a., celebradas en Addis Abeba el 7 de junio de 1966.

63. En cartas de 31 de mayo, 4 de junio y 5 de junio de 1966 (A/AC.109/174, A/AC.109/175 y A/AC.109/176), el Ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania, el Representante Permanente de Marruecos y el

Embajador de España en Addis Abeba solicitaron que delegaciones de sus respectivos países fueran autorizadas a participar en el examen por el Comité Especial de las cuestiones de Ifni y el Sáhara Español.

64. En su 435a. sesión el Comité Especial decidió acceder a estas solicitudes sin ninguna objeción.

65. Por carta de 7 de junio de 1966 (A/AC.109/176/Add.1), el Embajador de España en Addis Abeba comunicó que su delegación no participaría en el examen por el Comité Especial de las cuestiones de Ifni y el Sáhara Español.

Declaraciones generales

66. El representante de Marruecos, haciendo uso de la palabra a invitación del Presidente, dijo que desde que el Reino de Marruecos había conquistado su libertad y su independencia e ingresado a las Naciones Unidas, la preocupación constante de Su Majestad el Rey había sido siempre recuperar los territorios marroquíes que aún seguían bajo el dominio colonial y que habían sido separados del país en nombre de una política arbitraria y anexionista aplicada a expensas de Marruecos por las Potencias que le habían colocado bajo sus protectorados respectivos. Legada por el colonialismo, esta situación totalmente injusta, contraria a los acuerdos y a los tratados internacionales que garantizaban la integridad territorial del Reino de Marruecos, había suscitado inevitablemente la oposición creciente y tenaz de todo el pueblo marroquí, incluso las poblaciones que vivían en esas regiones separadas de Marruecos.

67. El Gobierno marroquí creía firmemente en la virtud de las soluciones negociadas y pacíficas y fundaba su política en el triple principio del derecho, la justicia y el respeto de los compromisos contraídos. Por consiguiente, desde los primeros días de la independencia había tratado, por la vía diplomática, de iniciar negociaciones para conseguir que se devolvieran esos territorios a la patria marroquí. Se hubiera podido creer que Marruecos había dado vuelta definitivamente a las páginas coloniales de su historia y que estaba abierto el camino para una cooperación fructífera, ya que se basaría en la amistad sincera y el respeto mutuo entre Marruecos y el antiguo colonizador. En estos últimos diez años el Gobierno marroquí, por intermedio de sus representantes en los órganos competentes de la Asamblea General, había tratado, constante y regularmente, de dejar constancia de sus legítimas reivindicaciones sobre los territorios que se le habían quitado. A este título los representantes de Marruecos, tanto ante la Cuarta Comisión como ante la Asamblea General, y más adelante y desde su creación ante el Comité Especial de Descolonización, habían expresado siempre en una forma u otra sus reservas más expresas y recordado los derechos imprescriptibles de Marruecos a la soberanía sobre esos territorios.

68. El 16 de octubre de 1964 el Comité Especial había adoptado, sobre Ifni y el Sáhara llamado español, una resolución en la que rogaba a la Potencia Administradora que adoptara las medidas necesarias para liberar a esos territorios de la dominación colonial. Esa decisión, adoptada por unanimidad, había sido el comienzo de una acción positiva que según habían creído los miembros del Comité debía llevar lógicamente esos territorios marroquíes a su plena emancipación, es decir, a su liberación de la dominación colonial conforme

a las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

69. Desgraciadamente, durante el decimonoveno período de sesiones no habían podido funcionar las comisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y había resultado así materialmente imposible examinar el informe del Comité Especial en 1964. Sólo a fines del año anterior había podido ser adoptado ese informe por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones. En esa misma oportunidad se había aprobado la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, también por unanimidad con excepción de dos voces: la de España y la de Portugal. El artículo 2 de la parte dispositiva de esa resolución decía lo siguiente:

"Pide encarecidamente al Gobierno de España, como Potencia Administradora, que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los Territorios de Ifni y del Sáhara Español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos Territorios."

70. Aunque Marruecos no se contaba entre los coautores de esa resolución, la había apoyado en conjunto y había votado en su favor. Cuando se había preparado ese texto la delegación marroquí había estado animada constantemente de un espíritu de conciliación y de transacción. Más aún, había querido atenerse a la prudencia y a la perspicacia de los miembros de la Cuarta Comisión y por esa razón, y a pesar de tratarse de un problema fundamental y que le interesaba muy directamente, había aceptado algunas enmiendas que no reflejaban exactamente su posición.

71. En ese caso la preocupación constante del Gobierno de Marruecos era justamente trabajar, como lo había hecho siempre y de la manera más dinámica, para que el colonialismo en todas sus formas de colonización y explotación desapareciera definitivamente de África, de Asia y de América Latina y cediera finalmente el lugar a un orden nuevo donde los pueblos pudieran vivir realmente en libertad, dignidad y disponer libremente de su patrimonio nacional, tanto cultural como material. Expresadas en esta gran capital africana, esas ideas debían tener una resonancia aún más profunda que en cualquier otra parte. Esto era particularmente cierto porque los pueblos de la parte oriental del continente africano, lo mismo que el pueblo marroquí, habían visto también violada su independencia nacional y su integridad territorial por la agresión colonial.

72. El Comité Especial estudiaba en este período de sesiones el problema que planteaba el porvenir y la liberación de los Territorios de Ifni y el Sáhara llamado español basándose en particular en la resolución 2072 (XX) relativa a la cuestión de esos territorios. Esta importante resolución, que llevaba fecha 16 de diciembre de 1965, había sido aprobada por la Asamblea General durante su 1398a. sesión plenaria. Habían transcurrido ya más de cinco meses desde esa fecha y hasta entonces las reacciones de la Potencia Administradora, tanto en lo que se refería a las declaraciones oficiales como a las nuevas disposiciones adoptadas en los Territorios mismos, incluso las demostraciones de fuerza, indicaban que la política colonial seguida con respecto a esos Territorios no reflejaba en modo alguno la influencia de esa resolución. Por el contrario, la actitud de la Potencia Administradora frente a las poblaciones locales se traducía ahora por una severidad incomprensible. Al

mismo tiempo que aumentaba cada vez más la implantación de la colonización europea, las autoridades civiles y militares intensificaban su política de división y de presión sobre los naturales del país utilizando los procedimientos más diversos. Se asistía, por lo demás, a tentativas cuyas consecuencias podrían ser muy graves y que consistían en hacer explotar ciertos yacimientos minerales con el concurso de capitales extranjeros. Esas actividades ilegales demostraban el poco caso que hacía la Potencia Administradora de los elementos políticos y jurídicos del problema. Además, durante esos últimos meses había habido una campaña venenosa y sistemática desencadenada por ciertos órganos oficiosos de la prensa madrileña los cuales afirmaban, con una vehemencia desacostumbrada, que esos territorios eran y seguirían siendo provincias españolas al mismo título que León, Castilla o Asturias.

73. Ese comportamiento de un país amigo había sorprendido un tanto al Gobierno marroquí, que conservaba siempre grandes esperanzas de que fuese posible una gran cooperación entre los dos países. Pero holgaba decir que esa cooperación debía basarse en el nacimiento de un estado de espíritu nuevo y conforme a las exigencias de la descolonización en África y en el mundo. El Gobierno de Marruecos no había cesado, pues, de conceder a esas exigencias una importancia muy particular, tanto en cuanto a la contienda territorial que seguía pendiente con España como en lo que se refería al problema colonial en conjunto; y no podía permanecer indiferente ante esta inquietante evolución de la política colonial española con posterioridad a la aprobación por la Asamblea General, en diciembre último, de la resolución 2072 (XX). Por ello, y para reforzar aún más los medios de que disponía el Comité Especial, el Gobierno marroquí había estimado que los territorios marroquíes que seguían aún bajo la dominación española debían ser, de todos modos, liberados. Como su liberación mediante negociaciones y según la fórmula de la restitución pura y simple al Reino de Marruecos no parecía contar por el momento con el acuerdo del Gobierno de Madrid, el Gobierno de Marruecos proponía que se concediera la independencia a esos Territorios en los plazos más breves.

74. Pero si el Gobierno de Marruecos, cada vez más inquieto ante la posibilidad de que se perpetuaran por tiempo indeterminado las consecuencias del colonialismo español sobre esta parte de su territorio nacional, había juzgado necesario proponer ese método para poner fin a una situación anacrónica, no había que llegar por ello a la conclusión de que Marruecos abandonaba sus derechos de soberanía. Importaba también que esta independencia no fuera sólo aparente y concedida únicamente para engañar a la opinión internacional y disfrazar un colonialismo aún más virulento y más agresivo. Era necesario que fuera una independencia auténtica que permitiera a las poblaciones de esos Territorios ejercer por sí mismas todas las responsabilidades del poder, lejos de toda presencia, presión o injerencia colonialista de carácter militar, político o económico. Esta solución tenía el mérito de ser a la vez conforme a los objetivos perseguidos por el Comité Especial y a la necesidad de salir del atascadero actual, que sólo aprovechaba a los intereses del colonialismo y del extranjero. Aunque el Gobierno de Marruecos adoptaba esa posición, entendía continuar sus esfuerzos pacíficos y desechar los argumentos que invocaba la Potencia Administradora para eludir las obligaciones que le correspondían frente

a la comunidad internacional y, sobre todo, la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

75. El Gobierno de Marruecos estaba convencido de que la liberación y la independencia de las poblaciones marroquíes del Sáhara llamado español, cuyo patriotismo y honor nacional habían resistido todas las pruebas, permitirían a esas poblaciones escoger la vía más conforme a sus intereses y a sus aspiraciones. Cuando fueran dueños de su destino y gozaran de entera libertad, los habitantes de esos Territorios sabrían cumplir sus deberes de ciudadanos conscientes y dignos y trabajarían, por la fuerza misma de las cosas, en favor de una política conforme a los objetivos nacionales de su pueblo y en la perspectiva de la unidad africana. Persuadido de que el camino de la unidad pasaba por la liberación y la independencia, Marruecos no podía tolerar indefinidamente que algunos marroquíes siguieran privados de su libertad y sometidos a un régimen colonial que no hacía más que intensificar su política de dominación y de explotación. Por otra parte, cabía esperar que España, la Potencia Administradora, que por la voz de sus dirigentes y sus representantes en las Naciones Unidas había apoyado ya la obra de descolonización iniciada en diferentes partes del mundo, hiciera examen de conciencia y tuviera en consideración los derechos inalienables de las poblaciones interesadas, es decir, su derecho a la libertad y al bienestar moral y material.

76. El orador quería reafirmar en esta oportunidad, en nombre del Gobierno de su país, que de ningún modo se debía interpretar que la posición adoptada por Marruecos significaba el abandono de sus derechos sobre el Sáhara que se encontraba bajo dominación española. Esos derechos de soberanía seguían siendo imprescriptibles. Era una soberanía nacional establecida desde los tiempos más remotos de la historia de Marruecos y que sólo había sido interrumpida recientemente por una ocupación colonial de hecho.

77. Al proponer al Comité Especial que concediera la independencia a sus Territorios del Sáhara, el Gobierno marroquí quería facilitar una vez más la misión del Comité Especial y permitirle llevar a cabo su obra de descolonización. Quería también eliminar así lo que hasta entonces parecía haber sido invocado como pretexto para perpetuar una dominación colonial que había durado demasiado. El observador esperaba que los miembros del Comité Especial tomaran en consideración los esfuerzos de Marruecos para hacer una contribución positiva a sus trabajos con miras a la solución definitiva de ese grave problema. El Gobierno de Marruecos estimaba que su posición actual debería dar al Comité la posibilidad de medir el alcance de sus propias responsabilidades, responsabilidades que el Comité, sin duda alguna, sabría asumir plena y enteramente.

78. Para terminar, el representante de Marruecos expresó la esperanza de que el Comité Especial, de conformidad con la doble misión que se le había confiado, accediera a la solicitud de Marruecos aprobando una resolución y adoptando las medidas apropiadas para hacer efectiva la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en esa parte del territorio nacional marroquí ocupada por España en calidad de Potencia Administradora.

79. El representante de Mauritania, haciendo uso de la palabra a invitación del Presidente, indicó que no se referiría a Ínfi a esta altura de los debates y que se proponía desarrollar la cuestión del Sáhara Español.

80. Recordó que bajo el régimen colonial Mauritania había estado ocupada por Francia y España. La parte francesa había recobrado su independencia con la ley de base.

81. La parte española, designada bajo el nombre de "Sáhara Español", comprendía Río de Oro y Saguia el Hamra; abarcaba una superficie de 280.000 kilómetros cuadrados y se extendía desde el 9 hasta el 17 grado de longitud oeste y del 21 al 27 grado de latitud norte, constituyendo así la región noroeste de Mauritania independiente, la cual iba del 5 al 17 grado de longitud oeste y del 15 al 27 grado de latitud norte. Pero los límites geográficos no eran los únicos elementos que confirmaban que el Sáhara Español era parte integrante de la República Islámica de Mauritania, porque a ambos lados de la frontera se encontraban en realidad las mismas tribus, la misma práctica de la religión musulmana, el mismo idioma y las mismas tradiciones.

82. La colonización había dividido al país conforme a fronteras arbitrarias y fijadas, por lo demás, muy aproximativamente.

83. En 1884 España, fundándose en la Declaración de Berlín según la cual todo territorio "libre" podía ser ocupado, había informado a las demás Potencias que asumía el protectorado de la costa occidental de África comprendida entre los paralelos 20 y 27 de latitud norte. Las fronteras entre las posiciones francesas y españolas sólo habían sido fijadas, con una precisión no muy rigurosa, por las convenciones de 27 de junio de 1900, 3 de octubre de 1904 y 27 de noviembre de 1912.

84. El régimen de Rabat había tratado de insinuar que las reivindicaciones mauritanas sobre el Sáhara Español no eran más que una maniobra diplomática para lograr que el Reino Jerifiano reconociera a la República Islámica de Mauritania. Pero lo cierto era que desde el alba misma de su independencia, y sin dejar de oponerse a toda transacción acerca de su soberanía, la República Islámica de Mauritania había expresado siempre su punto de vista sobre el problema del Sáhara Español. Así lo había hecho repetidas veces por la voz más autorizada de todas, la de su Jefe de Estado, y por la de sus representantes en las Naciones Unidas ante el Comité Especial, la Cuarta Comisión y la Asamblea General. Los hechos históricos recordados a este respecto por la República Islámica de Mauritania eran irrefutables. Cabía señalar, entre otros, el tratado de paz celebrado en 1767 entre el soberano de España y el Sultán Mulay Mohamed de Marruecos, cuyo artículo 18 estipulaba lo siguiente:

"Su Majestad Imperial se abstiene de discutir el establecimiento que Su Majestad Católica quiere fundar al sur del río Nun, ya que no podría asumir responsabilidad por los accidentes y desgracias que pudieran ocurrir por no extenderse hasta allí su soberanía, y porque las tribus vagabundas y feroces que habitan ese país han causado siempre daños a los habitantes de las Islas Canarias y los han reducido a la esclavitud."

85. Ese documento, que tenía dos siglos, demostraba bien lo que valían las afirmaciones marroquíes de que la soberanía jerifiana se ejercía sobre los territorios que constituían el Sáhara Español desde hacía más de mil años. Y si se habían producido hechos nuevos después de ese tratado, jamás habían sido en el sentido definido por Marruecos. Esos hechos nuevos no eran ya tratados sino tentativas de incursiones llevadas a ca-

bo con el fin de invadir el Sáhara, cosa que las tribus locales jamás habían aceptado. En 1863, cuando aún vivía su padre, el Príncipe Mulay Hasán había lanzado una primera expedición que había fracasado en Agadir. En 1882 el mismo Mulay Hasán, coronado ya Sultán, había aprovechado su única oportunidad de llegar al Cabo Nun, pero no había podido mantenerse allí bastante tiempo como para hacer creer en la sumisión de las tribus locales. Finalmente en 1883, Mulay Hasán, en una última tentativa, había procurado en vano pasar más allá del paralelo de Agadir. Las puertas del Sáhara, pues, no habían querido ceder jamás ante las invasiones marroquíes. El "Sultán Azul", por el contrario, y como para renovar la gloriosa epopeya de los Almorávides, había tenido menos dificultad en ocupar Marrakech.

86. Sólo la intervención francesa, por consiguiente, había podido impedir que se fundara una nueva dinastía mauritana en el Mogreb. Por consiguiente, se veía hasta qué punto el término de protectorado (relaciones establecidas entre Francia y Marruecos) correspondía a una realidad profunda en cuanto representaba una verdadera protección de ciertos intereses marroquíes particulares. Era, pues, con todo conocimiento de causa que hasta hacía poco tiempo los dirigentes marroquíes reconocían que el Sáhara Español era parte integrante de Mauritania. El régimen de Rabat, en un documento oficial y ya célebre, el Libro Blanco difundido profusamente en 1960 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Su Majestad Jerifiana, afirmaba lo siguiente:

"Mauritania es un vasto territorio que comprende las regiones al sur del Reino de Marruecos entre las regiones de Tindouf y de Saguia el Hamra, el Sáhara argelino al este, la costa atlántica al oeste y el río Senegal al sur.

"Para separar mejor a Mauritania del resto del Reino Marroquí, España desde hace poco tiempo ha reemplazado la expresión "Mauritania española" por la de "Sáhara Español".

"La capital importancia estratégica de Mauritania, consecuencia de su situación geográfica, dio origen, desde los comienzos del siglo XX, a la penetración franco-española."

87. El epígrafe del mapa anexo al mismo Libro Blanco decía lo siguiente:

"Problema de Mauritania-Mapa simplificado que muestra la porción del territorio mauritano bajo dominio francés y la porción bajo dominio español. Marruecos comprende todo el territorio que se extiende de Tánger a San Luis de Senegal."

88. A esos hechos y a esos documentos cuya autenticidad podía verificarse fácilmente, el Gobierno de Su Majestad Jerifiana no había opuesto argumentos convincentes. Agotados los argumentos, había que hacer alarde de amistad hispano-marroquí.

89. También en ese caso cabía preguntarse si el régimen de Rabat no se había encontrado frente a reticencias análogas a las que habían impedido siempre a los soberanos jerifianos ocupar el Sáhara. En efecto, el 16 de diciembre de 1965 Su Excelencia Don Manuel Aznar, representante de España, hacía observar en la 1398a. sesión plenaria de la Asamblea General que Ifni y el Sáhara eran dos entidades geográficas muy diferentes, lo que era una forma muy clara de invitar al representante de Marruecos a limitar las reivindicaciones de su Gobierno al Territorio de Ifni.

90. A pesar de esa advertencia, bastante amistosa por su discreción, el representante de Marruecos se había puesto a demostrar, con abundancia de citas y palabras puestas en boca del representante de España ante el Comité Especial, que Madrid y Rabat habían convenido en iniciar conversaciones sobre el Sáhara Español. A esto había respondido el Sr. Don Jaime de Piniés, representante adjunto de España, con un desmentido inequívoco en el que afirmaba que no era posible citar una parte de una o varias intervenciones y omitir otra parte pues el conjunto constituía un todo armonioso, y que la parte a la que se había referido el representante de Marruecos calificándola de acuerdo en el curso del año 1963, no había sido tal.

91. Y como Marruecos se jactaba de sus buenas relaciones con España, convenía recordarle el testimonio de un periódico madrileño, el *ABC*, en el que Salvador López de la Torre, especialista en cuestiones del Sáhara, escribía en 1961:

"En realidad, se siente progresivamente un cambio desde un punto situado más al norte, la cuenca del río Sus, en la región de Agadir. A partir de entonces se comienza a encontrar superpuestas dos formas de vida, los seminómadas que se van haciendo cada vez más raros para ceder el lugar a los grandes nómadas pastores independientes y altaneros, con los cuales los reyes marroquíes no tuvieron jamás relaciones amistosas en el curso de su historia. En la cuenca del Sus aparecen ante todo dos formas de vida diferentes, que se acentúan considerablemente a medida que se descende hacia el sur, en la cuenca del río Asaka, y la frontera definitiva está situada en la cuenca del río Draa. Y si se pueden encontrar aún en la región del Draa hombres del desierto que tienen lazos de parentesco con las familias de los contrafuertes del Antiatlás al sur de ese mismo río, es imposible hallar ningún vestigio que permita vincular esa región a la del norte."

92. El mismo periodista agregaba:

"No tenemos ningún motivo para contradecir al buen Sultán Mulay Mohamed, que firmó el tratado de paz y de comercio de 1767, en tiempos de Carlos III, con esta confesión que conviene recordar ahora:

"Su Majestad Islámica se abstiene de discutir el establecimiento que Su Majestad Católica quiere fundar al sur del río Nun, ya que no podría asumir responsabilidad por los accidentes y desgracias que pudieran ocurrir por no extenderse hasta allí su soberanía."

"Su Majestad Islámica sabía exactamente lo que decía. Al sur del río Nun, es decir del río Draa actual, comenzaba la región donde reina la anarquía, el Bled Es Siba, como lo llamaban los marroquíes, simplemente porque se trataba de una región a la cual la soberanía del Sultán, como él mismo lo dice, no se extendía. Es allí, en efecto, que comienza un mundo completamente diferente.

"Por esa razón, entendemos que las tentativas del Sultán no han ido jamás más allá del río Sus, que es la primera frontera del Sáhara, y que sólo una vez, aprovechando la huida de las tribus locales que habían dejado pasar la caravana real para evitar combates, logró episódicamente llegar al río Nun, conocido hoy con el nombre de río Draa, pero sólo por breves horas.

"Basta ver en un plano la distancia que separa el río Nun o Draa del territorio auténticamente del Sáhara para comprender a qué punto es justa la idea de que Marruecos es la Jazzirat al Maghrib, la isla del occidente, la isla del Mogreb, entre dos mares de naturaleza diferente. Sólo se puede comprender la historia del desierto y lo que podría llamarse su "filosofía", si se considera la frontera meridional de Marruecos como un verdadero río, como el límite entre dos mundos diferentes.

"Los roces históricos inevitables entre esos dos mundos heterogéneos se desarrollaron siempre unilateralmente. Los encuentros entre los hombres del Sáhara y los hombres de Marruecos consistían en la invasión del norte por el sur sin ninguna contrapartida que tomase la forma de una marcha del norte hacia el sur. La controversia entre esos dos universos vecinos y distintos ha conocido un solo vencedor: el sur, es decir, el desierto; el norte, es decir, Marruecos, era siempre el perdedor. La epopeya almorávide, que partió de los territorios mauritanos actuales, dominó Marruecos para llegar a la península ibérica.

"La primera gran victoria del Sáhara contra el Mogreb, siguiendo la dirección sur a norte, trazó el camino que se convertiría en el de las guerras que tendrán lugar en esta parte de África. El breve episodio aventurero del Pachá Djuder contra Tombuctú será la única excepción en ese movimiento en una sola dirección.

"Casi mil años después de la excursión almorávide, el "Sultán Azul" (de Mauritania) invadía Marruecos meridional y ocupaba Marrakech. Era la repetición, un milenio más tarde, de ese movimiento de conquista que es como un factor constante en el Sáhara y por el cual puede explicarse perfectamente la hostilidad de los nómadas que habitan esos territorios frente a la amenaza extranjera que representa Marruecos. Como decía Montagne, "El río Nun, que nosotros llamamos Draa, constituye la línea de demarcación entre dos sistemas diferentes de organización social y política: es la ribera meridional de la isla del Mogreb".

93. Mauritania consideraba, en efecto, que los sueños marroquíes representaban únicamente las secuelas de esas reivindicaciones de las que el Presidente Moktar Ould Daddah decía que eran tan ridículas como las que podría formular hoy Inglaterra contra Francia bajo pretexto de que en la época de Juana de Arco, París y buena parte de Francia estaban ocupadas por los ingleses.

94. La República Islámica de Mauritania podía invocar también su amistad con España, pero no en lenguaje jerifiano, según el cual las buenas relaciones constituían un argumento convincente, si no condición suficiente, para que Madrid cediera sus posesiones coloniales a Rabat. En el sentido en que lo entendía el Gobierno mauritano, la amistad hispano-mauritana se basaba en la comprensión mutua y la voluntad común de colaborar lealmente. El Gobierno de Mauritania había invitado a España a celebrar conversaciones francas y sinceras, propias de los lazos particulares que unían a los dos países, para hallar una solución al problema. Pero jamás le pediría que le cediera Ifni ni siquiera Tarfaya, que graciosamente había cedido, sin embargo, a Marruecos. Era lo que el Presidente Moktar Ould Daddah subrayaba en su informe del 28 de noviembre de 1965 sobre el estado del país:

"Sabemos que en el ámbito de esta fructífera cooperación podrá hallarse una solución feliz que consagre la integración del Sáhara Español al territorio nacional, permitiendo así que todo nuestro país vuelva a estar reunido. La actitud progresista del Gobierno español frente a los problemas de descolonización permite tener confianza en el porvenir."

95. Esa confianza se había puesto de manifiesto hacía dos meses cuando el Ministro español de Asuntos Exteriores había visitado Mauritania del 7 al 9 de marzo de 1966. El comunicado conjunto publicado con motivo de la visita decía entre otras cosas:

"En el curso de esas conversaciones, las dos delegaciones examinaron en un ambiente de perfecta cordialidad y de comprensión mutua todos los problemas políticos y económicos que interesan a ambos países. Las dos delegaciones, que desean mantener y desarrollar cada vez más las excelentes relaciones existentes entre España y Mauritania, expresaron su firme voluntad de afianzar y diversificar su colaboración en todos los terrenos.

"Las dos delegaciones han apreciado los progresos de esta colaboración y han decidido adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la realización de los proyectos que se establecerían de común acuerdo."

96. Apoyándose en esa manifestación de amistad y ese deseo sincero de entablar un diálogo franco y leal, el Gobierno de Mauritania había decidido hacer saber al Gobierno español que estaba dispuesto a entablar negociaciones sobre el problema del Sáhara Español, habida cuenta de la resolución 2072 (XX) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1965.

97. Pero no se debía interpretar que esa actitud del Gobierno de Mauritania era una retirada o significaba que ese Gobierno se oponía a que los pueblos del Sáhara accedieran a la independencia. En ningún caso podría consentirse en mantener una sola parcela del territorio africano bajo el dominio extranjero. El día en que el Comité Especial quisiera ir más allá de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno de Mauritania no se opondría de ningún modo a la liberación del Sáhara Español.

98. El representante de Marruecos dijo que la declaración que acababa de escuchar le dispensaba ciertamente de continuar el debate. El había cumplido su función, que consistía en hacer una declaración de carácter positivo en nombre de su Gobierno. El portavoz de Mauritania se había ingeniado para afirmar los derechos de España sobre esta parte del territorio marroquí en vez de procurar que el Comité Especial definiera su posición sobre su descolonización. Su declaración consistía sobre todo en citas de los periódicos, entre otros de un artículo de un periodista español calificado de "especialista en cuestiones del Sáhara". El punto de vista expuesto por el portavoz de Mauritania no era un punto de vista africano. Había defendido una tesis puramente colonialista, que el observador de Marruecos no podía menos de lamentar fuera defendida por un africano.

99. El representante de Mauritania dijo que era imposible que el Gobierno de Mauritania asumiera la defensa del colonialismo, y menos aún en Río de Oro o en el Sáhara Español. Si había citado una parte de un

artículo de un periodista español, era porque en esas circunstancias era costumbre hacer esas citas. Estaba enteramente de acuerdo con Marruecos en cuanto al derecho a la libertad del Sáhara Español. Ese territorio debía ser completamente independiente de España, pero también de Marruecos.

100. El representante de Túnez declaró que el Gobierno de Túnez estudiaría con el mayor interés el contenido de las declaraciones hechas por los representantes de Marruecos y de Mauritania y emplearía todos los medios a su disposición para que fueran satisfechas sus legítimas y justas reivindicaciones. Estaba convencido de que el Comité Especial tendría debidamente en cuenta esas dos declaraciones cuando buscara las vías y medios que pudieran llevar a una solución pacífica de ese espinoso problema.

101. La delegación de Túnez había intervenido sobre todos los puntos que figuraban en el programa del Comité Especial. Faltaría a su deber si no definiera su posición frente a la cuestión de Ifni y del llamado Sáhara Español, tanto más cuanto que eran territorios vecinos a Túnez y a cuya liberación concedía la mayor importancia el Gobierno de este país. La situación de esos dos territorios era muy difícil de solucionar porque ciertos Estados Miembros no aceptaban su derecho a la soberanía. Pero también en este caso la actitud del Gobierno de Túnez había sido siempre clara y definida porque estaba dictada por la razón y la justicia.

102. En efecto, la delegación de Túnez estimaba que para resolver equitativamente diferencias de ese orden era necesario tener ante todo en cuenta consideraciones históricas y geográficas. En el caso de Gibraltar y de las Islas Malvinas, por ejemplo, Túnez se había opuesto siempre a las reivindicaciones mal fundadas del Reino Unido pronunciándose en favor de la restitución de esos dos territorios a España y a la Argentina, respectivamente, pues no sería posible concebir que una Potencia extranjera pudiese conservar un territorio que por su historia y su geografía estaba unido a otro país. Era una cuestión de justicia y de seguridad.

103. En el caso de Ifni y del llamado Sáhara Español la delegación de Túnez tenía derecho a esperar de España una actitud análoga, tanto más cuanto que relaciones amistosas de larga data unían ese país al África del Norte; además, las poblaciones de esos países, que tenían muchos puntos comunes, estaban ligadas por lazos económicos y culturales cada vez más estrechos.

104. Desgraciadamente, era inevitable comprobar que hasta ese momento la Potencia Administradora continuaba reivindicando el ejercicio de su soberanía sobre esos territorios. La delegación de Túnez rechazaba esas reivindicaciones porque no podría admitir por más tiempo el dominio de Potencias extranjeras, fueran cuales fueren, sobre el continente africano. Se sumaba así a la opinión expresada el día anterior por el secretario general administrativo de la Organización de la Unidad Africana, quien había dicho lo siguiente: "Los pueblos africanos no estarán plenamente satisfechos hasta que se haya retirado a toda autoridad extranjera al África el último milímetro cuadrado de territorio africano".

105. Sentado ese principio, y teniendo en cuenta la gran estima en que los países africanos y árabes tenían a España, la delegación de Túnez apelaba a la Potencia Administradora para que, en el plazo más breve posible, renunciara voluntariamente a la soberanía que ejercía sobre esos territorios en vez de hacer más dura

su posición dividiendo y oprimiendo a los naturales del país. Esa Potencia debería asimismo declarar que estaba dispuesta a negociar para traspasar sin tardanza los poderes a los propietarios originales de esos territorios. En esa forma no haría más que conformarse a las disposiciones de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, aceptada por unanimidad con excepción de dos votos: el de España y el de Portugal. Si España procediera así, aumentaría ciertamente el aprecio que por ella sentían los países africanos y árabes, que no dejarían de concederle ventajas más duraderas y más apreciables.

106. Para terminar, el representante de Túnez explicó que su delegación presentaría su contribución a los trabajos del Comité Especial cuando se estudiaran las vías y medios propios para lograr una solución pacífica del problema, y que apoyaría toda medida conforme a los principios que había definido en el curso de su intervención.

107. El representante de Chile dijo que las declaraciones hechas por los representantes de Mauritania y Marruecos serían tenidas en cuenta por el Comité Especial cuando examinara la cuestión de Ifni y el Sáhara Español; pero que complicaba la tarea del Comité el hecho de que dos Estados africanos hermanos reivindicasen la soberanía sobre esos territorios. Por esa razón, pidió a España que ayudara al Comité a poner fin al colonialismo aplicando las disposiciones del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General.

108. El representante de Irak apoyó el llamamiento a España hecho por el representante de Túnez pidiéndole que aplicara la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General. No cabía duda de que muchos otros miembros del Comité Especial compartían las opiniones expuestas por el representante de Túnez.

109. El representante de Malí indicó que su delegación estudiaría con la atención que merecían las declaraciones del representante de Marruecos y de Mauritania. Se asociaba a la posición del representante de Túnez y señaló a la atención del Comité el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, de fecha 16 de diciembre de 1965, por el que se "pide al Comité Especial que informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones". Pidió también que la delegación española, si estaba presente, hiciera saber al Comité Especial su opinión sobre la situación de Ifni y el Sáhara Español, habida cuenta de la resolución aprobada por la Cuarta Comisión sobre esta cuestión.

110. El representante de Venezuela dijo que su delegación estaba convencida de que España estaba dispuesta a descolonizar los territorios sometidos aún a su control y a aplicar las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, como lo habían afirmado con frecuencia sus representantes en el Comité Especial y en la Asamblea General. Sin embargo, en el caso especial de Ifni y el Sáhara Español el problema se complicaba porque dos países por lo menos habían reivindicado su soberanía sobre esos territorios y porque hasta ese momento ni el Comité Especial ni la Asamblea General habían indicado con qué Potencia debería negociar España. La delegación de Venezuela estimaba, por consiguiente, que el Comité debería aplazar el examen de la cuestión hasta que España presen-

tara su informe en el vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, conforme a las disposiciones de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General.

111. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba convencido de que las opiniones expuestas por los representantes de Marruecos y Mauritania serían tenidas en consideración por todos los miembros del Comité Especial. La delegación soviética, por su parte, las consideraba de la mayor importancia. Estimaba que al estudiar la cuestión de Ifni y el Sáhara Español convenía recordar el discurso tan emocionante pronunciado por el Sr. Diallo Telli, secretario general administrativo de la OUA, quien había dicho en particular: "El destino de esos pequeños territorios nos interesa al mismo título que el de las grandes colonias, pues plantea una cuestión de principio. La descolonización a que aspiramos y por la que trabajamos debe referirse a todos los territorios africanos grandes o pequeños, ricos o pobres. Los pueblos africanos no estarán plenamente satisfechos en esta materia hasta que haya sido retirado a toda autoridad ajena a África el último milímetro cuadrado de suelo africano".

112. Hacía cinco años que había sido adoptada la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La delegación soviética señalaba ante todo, como cuestión de principio, que esa Declaración se aplicaba a los dos territorios considerados, y luego, que España debía retirarse inmediatamente para librarlos de su dominación. La última vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas había estudiado esta cuestión en el curso de su vigésimo período de sesiones, había invitado al Gobierno español a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para liberar a Ifni y el Sáhara Español. Desgraciadamente se había podido ver que España hacía caso omiso de la posición adoptada por la Asamblea. Realizaba maniobras diplomáticas con el fin de demostrar que modificaba su política para abrir el camino hacia la independencia de los territorios que administraba, pero eso no era más que un juego diplomático. En realidad España utilizaba esos territorios como cartas de triunfo y como medio de presión para ganar tiempo y continuar ejerciendo su dominio sobre un suelo que no era el suyo. Con el mismo espíritu atraía capitales extranjeros a esos territorios. Era bien sabido que la mitad de las tierras cultivables había sido cedida en concesión a monopolios extranjeros. ¿A qué conclusión se podía llegar sino a la de que España continuaba vendiendo bienes que no eran suyos? La delegación soviética pedía, por consiguiente, que se aplicaran inmediatamente las disposiciones de la resolución 2072 (XX) aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1965.

113. El representante de Siria dijo que su delegación lamentaba que la Potencia Administradora hubiera abandonado su intención original de acelerar el proceso de libre determinación e independencia de Ifni y el Sáhara Español. Conforme a los términos de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, el Comité Especial estaba plenamente justificado para preguntar a España qué medidas había tomado tendientes a la liberación de esos territorios. Por otra parte, en cuanto a las reivindicaciones rivales sobre esos territorios, el representante sirio creía que debía ser posible llegar a una solución emprendiendo negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía, conforme se recomendaba en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la reso-

lución. Cabía esperar que Mauritania y Marruecos resolvieran pronto sus diferencias a fin de que pudieran consagrarse todos los esfuerzos a la causa de la emancipación de esos territorios de la dominación extranjera, y que España adoptara una política de descolonización.

114. El representante de Etiopía estimó que el Comité Especial debería hacer un examen a fondo de la cuestión de Ifni y el Sáhara Español antes de adoptar una decisión al respecto. Su delegación haría conocer entonces su opinión. Sugirió que la Secretaría preparara un documento de trabajo detallado sobre el punto, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por los representantes de Mauritania y Marruecos.

115. El representante de Irán apoyó a los oradores que habían hecho un llamamiento al Gobierno de España para que aplicara las disposiciones y los términos de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, y reafirmó el firme convencimiento de su delegación de que las cuestiones coloniales que ponían en juego problemas de soberanía debían ser resueltas mediante negociaciones, conforme al uso establecido en las Naciones Unidas.

D. DECISIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ESPECIAL

Consenso adoptado por el Comité Especial

116. En su 436a. sesión, celebrada el 7 de junio de 1966, el Comité Especial decidió, a propuesta del Presidente, adoptar el siguiente consenso en la cuestión de Ifni y el Sáhara Español:

"El Comité Especial solicita del Secretario General que haga llegar al Gobierno Español las opiniones expresadas en la presente sesión sobre Ifni y el Sáhara Español y que obtenga lo antes posible de dicho Gobierno información acerca de las medidas que ha tomado para aplicar el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 2072 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea General. Habida cuenta del párrafo 3 de la mencionada resolución, el Comité Especial reanudará la consideración de estos Territorios cuando se reciba la información solicitada."

E. NUEVO EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁵

Introducción

117. El Comité Especial consideró de nuevo Ifni y el Sáhara Español en sus 472a., 474a., 478a., 479a. y 481a. sesiones celebradas en la Sede entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre de 1966. El Comité tuvo ante sí una carta de fecha 8 de septiembre de 1966 (A/AC.109/202) del Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas en la cual, tras la adopción por el Comité Especial en su 436a. sesión del consenso referente a Ifni y el Sáhara Español, el Gobierno de España informaba al Comité Especial de su actitud y propósitos sobre la aplicación de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965. Esta carta aparece como anexo al presente capítulo.

⁵ Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) para una reseña de las discusiones sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a los Territorios considerados por el Comité durante sus reuniones en África.

118. En una carta de fecha 22 de septiembre de 1966 (A/AC.109/207) y en dos cartas de fecha 10 de octubre de 1966 (A/AC.109/208, A/AC.109/209), los Representantes Permanentes de Mauritania, Marruecos y España ante las Naciones Unidas solicitaron que delegaciones de sus respectivos Gobiernos fueran autorizadas a participar en las deliberaciones sobre este tema. En su 472a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, acceder a estas solicitudes.

119. En una carta, de fecha 4 de noviembre de 1966 (A/AC.109/211), el Representante Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas solicitó autorización para participar en las deliberaciones del Comité Especial durante su consideración de Ifni y el Sáhara Español. En su 474a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, acceder a esta solicitud.

Peticiones escritas y audiencias

120. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones escritas referentes a Ifni y el Sáhara Español:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento</i>
<i>Ifni</i>	
Sres. Mohammed Bey, Lahoussine Bey y Youssef	A/AC.109/PET.532
<i>Sáhara Español</i>	
Sr. El Abadila Ould Cheikh Mohamed Laghdaf y otros	A/AC.109/PET.562
Sres. Ould Sheikh Malainine y Mohamed Ould Haidalla	A/AC.109/PET.563
Sr. Seila Uld Abeida y otros cinco en nombre de "La Comisión elegida por el pueblo del Sáhara"	A/AC.109/PET.572

121. Las tres peticiones referentes al Sáhara Español contenían solicitudes de audiencia que fueron concedidas por el Comité Especial.

122. En sus 478a. y 479a. sesiones, el Comité Especial escuchó las declaraciones de los Sres. El Abadila Ould Cheikh Mohamed Laghdaf, Braïka Ould Ahmed Lahcen y Hamdi Ould Salek Ould Ba Ali. Los peticionarios estaban acompañados por los Sres. Brahim Ould Hassena Douihi, Abdallah Ould El Khattat y Habouha Ould Abeida.

123. En la 479a. sesión, el Presidente manifestó que los Sres. Sidi Mohamed Ould Haidalla, Dahi Ould Nagem, Slama Ould Sidi Ould Oumar y el Jeque Ould Mouhamed Saleh, cuya solicitud de audiencia había sido concedida, le habían informado que, a causa de dificultades de lenguaje, no harían su declaración oralmente sino que la presentarían por escrito. El Comité Especial decidió incorporar dicha declaración de los peticionarios a las actas del Comité.

124. En su 479a. sesión, el Presidente informó al Comité Especial que el Sr. Ould Sheikh Malainine que anteriormente había solicitado audiencia con el grupo precedente, había pedido ahora ser oído por separado. El Comité accedió a esta solicitud y el Sr. Malainine hizo su declaración en aquella sesión.

125. El Sr. El Abadila Ould Cheikh Mohamed Laghdaf declaró que los saharauís esperaban con confianza la decisión de las Naciones Unidas, que les liberaría de la opresión.

126. Río de Oro y Saguia el Hamra se encontraban al noroeste del continente africano y ocupaban apro-

ximadamente 280.000 kilómetros cuadrados. El litoral de la región estaba comprendido entre los paralelos 27° 40' y 20° 47' de latitud norte. Estas fronteras imaginarias y superficiales habían sido creadas por el colonialismo para desmembrar el continente africano y dividir a sus poblaciones.

127. En la región había más de 250.000 habitantes, pese a la afirmación de la Potencia colonial, según la cual no pasaban de 25.000. La Potencia colonial trataba de quitar importancia a esta región para que las Naciones Unidas se desinteresasen de ella. Las principales ciudades del Sáhara eran El Aaiún, Smara, Güera y Addakhla, que, posteriormente, fue llamada Villa Cisneros. Los habitantes pertenecían a las siguientes tribus: Regueibat, Isarguien, Ulad Delim, Ulad Tidrarin, Ait Lahsen, Filala, Ahl Cheikh aa El Ainaine y El Arosien, todas de origen árabe, cuya religión era el Islam y cuya lengua era el árabe. Desde tiempos inmemoriales todas estas tribus formaban parte de la nación marroquí. Más aún, la dinastía de los almorávides, que reinó en Marruecos durante dos siglos y que constituía un gran imperio, fue fundada por la tribu Lemtouna, originaria del Sáhara; el Territorio dependió de Marruecos durante el reinado de los Saaditas y de los Alaouitas. Los gobernadores del Sáhara eran nombrados directamente por los sultanes, desde la época de Mulay Ismail y Mulay Mohamed Ben Abdellah en los siglos XVII y XVIII hasta el reinado del Sultán Mulay Hafid, cuando Marruecos sucumbió al régimen de protectorado.

128. En principio, la idea de conquistar el Sáhara fue propugnada por sociedades privadas españolas tales como la Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas y la Sociedad de Africanistas y Colonistas. El 15 de octubre de 1884 los barcos de esas sociedades llegaron a Río de Oro y a Cabo Blanco y bajo la dirección de Emilio Bonelli los españoles construyeron barracas de madera e izaron el pabellón español. El 3 de noviembre del mismo año hicieron la misma operación en Dakhla, que a partir de entonces se llamó Villa Cisneros. El Gobierno español comunicó a las Potencias europeas que España colocaba bajo su protectorado todo el litoral del noroeste africano comprendido entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco. Con esto trataba España de dar una apariencia legal a su ocupación. Este acto dio lugar a la oposición de Francia y, tras de entablar negociaciones, las dos Potencias firmaron el tratado de Muni el 27 de junio de 1900.

129. El Estado marroquí y la población reaccionaron con más energía. La tribu de los Ouled Dlim atacó las instalaciones españolas y expulsó a los invasores. La resistencia popular impidió que los españoles extendieran su ocupación más allá de los puestos de Villa Cisneros y de Cabo Blanco, edificados por el Sr. Bonelli. España no pudo completar la ocupación de Río de Oro y de Saguia el Hamra hasta 1934, año en que Francia ocupó el Antiatlás y la región del Sur.

130. En cuanto a la región de Saguia el Hamra, Francia reconoció, en un acuerdo secreto firmado el 8 de octubre de 1904, la total libertad de acción de España en la región comprendida entre los paralelos 26° y 27° 40' de latitud norte. Pero antes de 1934, la ocupación española se limitaba a la ciudad de Tarfaya, al centro de Villa Cisneros y, desde 1920, al centro de Güera. Habiendo terminado su ocupación del Sáhara, España construyó bases militares en El Aaiún y fortificó las existentes en Villa Cisneros y Güera.

131. España dividió primeramente al Sáhara en tres regiones, cuyos nombres cambiaron según las circunstancias. Esos cambios de nombre tenían por objeto quitar a esas regiones su carácter marroquí para que, cuando Marruecos fuera independiente, no pudiera reivindicarlas, y España pudiera así perpetuar su dominación sobre esas regiones del Sáhara. Se dio a la región de Tarfaya el nombre de Zona Sur del Protectorado Español, a la región de Saguia el Hamra el de Zona de Ocupación Libre y a la región de Río de Oro el de Sáhara del Sur. Posteriormente, después de haber eliminado todos los signos externos que demostraban el carácter marroquí de estas regiones, España volvió a cambiar su denominación y Tarfaya se llamó Zona Norte del Sáhara, Saguia el Hamra se llamó Zona Central del Sáhara y Río de Oro se denominó Zona Sur del Sáhara.

132. España creía que podría conservar bajo su dominio la auténtica zona de Tarfaya y por eso no la transfirió a Marruecos después de la independencia de este país, como lo hizo con la zona que ocupaba al norte de Marruecos. La intención de España era integrar esa zona de Tarfaya en lo que entonces llamaba, y sigue llamando, sus posesiones de ultramar. Sin embargo, los habitantes obligaron a España a reconocer el estatuto de protectorado para esta zona, que evidentemente va más allá de Ued Draa. España sólo devolvió a Marruecos parte de Tarfaya y fijó arbitrariamente el paralelo 27° 40' de latitud norte, como el límite meridional de su zona de protectorado en el sur marroquí.

133. Esa división artificial de la región de Tarfaya no tenía ningún fundamento lógico, dado que no existía frontera alguna entre Tarfaya y Saguia el Hamra. Los geógrafos reconocían que Saguia el Hamra era una de las zonas más importantes del Sáhara meridional marroquí. Las tribus nómadas que recorrían Saguia el Hamra eran las mismas que recorrían Tarfaya. Además, el representante del Gran Visir para la zona del protectorado español en el sur de Marruecos, el Jeque Mohamed Laghdaf, no sólo era nombrado por el Jalifa del Sultán en Tetuán, sino que también era originario del Sáhara y residía en el actual Saguia el Hamra. Su padre, el jeque Ma Al Aymin, edificó en 1898 la ciudad de Smara, a ocho kilómetros al sur del río de Saguia el Hamra. Dicho jeque era el Jalifa del Sultán en el Sáhara y fue nombrado por un decreto real, o sea lo que entonces recibía el nombre de dahír jerifiano. Otros dahíres estipulaban que la autoridad del Jalifa se extendía desde Tarfaya hasta el Cabo Bojador y el Cabo Blanco.

134. Eran, éstas, realidades históricas, geográficas y sociales que nadie podía refutar. No había ninguna separación entre el sur marroquí y Tarfaya, Saguia el Hamra y Río de Oro, en lo que respectaba a la población, la naturaleza, la historia, la religión y las costumbres. El pueblo del Sáhara era un pueblo glorioso con un pasado ilustre, una cultura y una civilización.

135. Todo esto no significaba que los peticionarios reclamasen su integración con Marruecos, porque era exclusivamente el pueblo el que debía escoger el camino que mejor correspondiese a sus aspiraciones. La situación en el Sáhara era grave y explosiva, y era urgente encontrar una solución; no había ninguna diferencia entre el colonialismo español en el Sáhara y el colonialismo portugués en Angola o en la llamada Guinea Portuguesa. Ambos colonialismos trataban de imponer el elemento europeo sobre el elemento autóctono con fines

de explotación. Desde que acabó la guerra civil española, España había tratado de integrar en su propio territorio al Sáhara y había cambiado constantemente la organización administrativa de ese territorio. Así, en 1940 se constituyó el Gobierno Político Militar de Ifni y el Sáhara, y el Alto Comisario español en el norte de Marruecos fue designado Gobernador General de esos territorios. Este hecho, por otra parte, ponía de manifiesto que la situación política, social y geográfica del Sáhara era la misma que la del resto de Marruecos. En junio de 1958, o sea después de la independencia de Marruecos, España volvió a modificar el estatuto de esos territorios, que pasaron a ser dos provincias españolas, llamadas Ifni y Sáhara Español. Posteriormente, en abril de 1961, se decidió que todas las leyes españolas se aplicarían en la provincia del Sáhara y que las importaciones procedentes de la península no estarían sometidas a ningún gravamen aduanero. De ese modo se completaba la asimilación jurídica y administrativa del Sáhara a España.

136. En cuanto a la asimilación política, España había tratado de conseguirla mediante un plan cuyos principales puntos eran los siguientes: inmigración en gran escala de españoles al Sáhara, facilitándoles los medios y los privilegios necesarios para asegurar su supremacía sobre los autóctonos y para entregarles las riquezas del país; opresión de los autóctonos y su expulsión del territorio, para facilitar la inmigración española; destrucción de las tradiciones y de los valores morales y culturales de la población; presencia, para sostener esa política, de un numeroso ejército de ocupación cuyos efectivos representaban el doble de los habitantes civiles; concesión de privilegios enormes a ciertos lacayos del colonialismo para que cantasen las alabanzas de la dominación española.

137. Este proceso se había agravado cuando España había descubierto ciertos yacimientos mineros en Saguia el Hamra, concretamente yacimientos de fosfato y de hierro. Entonces España había tratado de atraer al Sáhara las inversiones de grandes sociedades mundiales. Ahí estaba el peligro para el Sáhara. Esos intereses colonialistas que España fomentaba serían un peligro para el porvenir del Sáhara y obstaculizarían una liberación basada sobre el principio de los derechos humanos y de las resoluciones de las Naciones Unidas, porque el apetito del capitalismo aventurero no tenía límites.

138. Los nacionalistas saharauís combatían esa política de España y sufrían una dura represión. El ejército español bombardeaba los aduares y violaba a mujeres y niñas. Los peticionarios poseían sobre esas atrocidades datos precisos que ponían a disposición del Comité Especial.

139. Al mismo tiempo que imponía su opresión, España trataba de forzar a los habitantes, los jeques y los jefes de tribu a firmar peticiones a favor de la integración con España. Las autoridades españolas habían tomado últimamente una decisión en virtud de la cual los saharauís no podían adquirir tierras ni bienes inmuebles si no aceptaban la nacionalidad española firmando un documento especial. Así pues, la expropiación de sus bienes, la aniquilación de su personalidad y la expulsión de su país eran el destino que reservaba España al pueblo saharauí, mientras pretendía reconocer su derecho a la libre determinación. España trataba de aparecer ante la opinión mundial como una Potencia colonial liberal y, sin embargo, en Saguia el

Hamra y Río de Oro practicaba una política de opresión y trataba de imponer el racismo tal como existía en Sudáfrica o en Rhodesia.

140. Para combatir ese colonialismo el pueblo del Sáhara sólo tenía dos caminos: denunciarlo ante las Naciones Unidas o tomar las armas y combatir hasta la liberación. Los saharauís no gozaban de libertades públicas para defender sus derechos y expresar por medios pacíficos sus reivindicaciones legítimas. En el Sáhara no existían la libertad de prensa, la libertad de expresión ni la libertad de reunión y, de hecho, el territorio estaba sometido a un régimen de ocupación militar. Los militares eran dueños y señores de personas y bienes.

141. El pueblo saharauí quería la independencia inmediata y total de su país. Con tal fin pedía a las Naciones Unidas que exigiesen el retiro de las tropas extranjeras y la interrupción de la inmigración española en el Sáhara. También pedía a las Naciones Unidas que controlasen el proceso de independencia, a fin de que el pueblo contase con todas las garantías para una aplicación sincera y justa de la libre determinación. Los saharauís no tenían confianza en la administración colonial española y sólo confiaban en las Naciones Unidas.

142. Era indispensable que todos los saharauís participasen en las elecciones que debían organizar las Naciones Unidas; para tal fin, debía permitirse el regreso de los refugiados que habían sido expulsados del país o que habían salido de él huyendo de las autoridades españolas. Ningún ciudadano español, fuese quien fuese, tendría derecho a participar en la determinación del futuro del Sáhara.

143. El pueblo del Sáhara confiaba en que las Naciones Unidas sabrían defenderle, como siempre habían defendido a los otros pueblos colonizados, y actuarían para poner fin al dominio colonialista y para ayudarle a realizar sus aspiraciones legítimas a la libertad y a la dignidad.

144. El Sr. Braika Ould Ahmed Lahcen dijo que la situación en el Sáhara Español era explosiva y de la máxima importancia; era indispensable que las Naciones Unidas tomasen con urgencia una resolución firme y decisiva para proteger al pueblo del Sáhara de la tragedia que estaba viviendo y poner fin a sus sufrimientos antes que la situación degenerase en un conflicto de imprevisibles consecuencias. Había que acabar con la opresión y el régimen de terror que imperaban en el territorio.

145. El pueblo del Sáhara tenía derecho a la libertad y a la independencia y había puesto toda su esperanza en que las Naciones Unidas le ayudarían a lograr ese objetivo. Asimismo, pedía al Gobierno español que abandonase su política antiafricana de supremacía del elemento europeo y de persecución de los saharauís.

146. Recientemente, las autoridades españolas del Sáhara habían obligado a los habitantes, hombres y mujeres, a firmar falsos documentos por medio de los cuales España trataba de demostrar que los habitantes del Sáhara preferían que el colonialismo español permaneciese en el territorio por tiempo indefinido. Esta maniobra de los colonialistas había dado lugar al licenciamiento de dos caídes que no quisieron firmar, y a la sublevación de 500 hombres que actualmente estaban refugiados en las montañas.

147. Con estas argucias ilegales el Gobierno de España pretendía seguir explotando los recursos econó-

micos del territorio e instalar en el Sáhara a una mayoría de europeos, a fin de crear un régimen de dominación blanca comparable al de Ian Smith. El colonialismo español trataba de dividir para reinar y de mantener a los saharauís en su situación actual de pobreza e ignorancia. La enseñanza no pasaba de un nivel muy bajo y estaba reservada a los hijos de las familias notables. Las autoridades españolas no vacilaban en utilizar la fuerza contra los nacionalistas, en torturar y asesinar a hombres, mujeres y niños inocentes. Muchos saharauís eran detenidos y enviados al campo de concentración de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Tal era la política con que España pretendía colocar a los saharauís al nivel del mundo libre y civilizado.

148. España creía que podría convertir al Sáhara en una España de ultramar, pero los saharauís eran africanos, árabes y musulmanes y estaban muy lejos de ser españoles.

149. El Front de libération du Sahara sous domination coloniale espagnole, organización a la que representaban los peticionarios, había luchado y seguiría luchando contra el colonialismo español hasta conseguir la independencia total e incondicional del territorio. Los nacionalistas eran pocos frente a la Potencia colonial, pero su fidelidad a la causa nacional y a la justicia, y la confianza que depositaban en las Naciones Unidas, serían el arma poderosa con que vencerían al enemigo del mundo libre, el colonialismo.

150. El Sr. Hamdi Ould Salek Ould Ba Ali manifestó que los peticionarios venían a las Naciones Unidas para exponer sus objetivos, es decir, el respeto a la libre determinación en el Sáhara Español. Los saharauís sentían el colonialismo como un peso muy grande sobre su existencia.

151. El pueblo del Sáhara no podía aceptar la supervivencia del colonialismo en su territorio y por eso pedía a la Potencia Administradora que reconociese su libertad e independencia bajo el control de las Naciones Unidas. Los peticionarios consideraban que los otros peticionarios que habían solicitado audiencia a las Naciones Unidas eran sus hermanos si venían a pedir también la independencia y la libertad del Sáhara. Sin embargo, si lo que pedían era algo distinto, serían considerados colaboracionistas y amigos del colonialismo.

152. Los Sres. Sidi Mohamed Ould Haidalla, Dahi Ould Nagem, Slama Ould Sidi Ould Oumar y el Jeque Ould Mouhamed Saleh dijeron en su declaración escrita que el llamado Sáhara Español era una región que desde el punto de vista geográfico y étnico era difícil de distinguir de Mauritania, de la cual fue separado mediante una línea teórica e imaginaria trazada al sur. Junto con las provincias vecinas de Tiris Zemmour y Baie du Lévrier constituía una sola región que no había razón para subdividir. Las tribus que ocupaban el territorio sumaban de 25.000 a 28.000 personas. Entre los peticionarios se encontraban representantes de los diversos distritos. Los nómadas que habitaban el Sáhara Español y Mauritania pertenecían a las mismas tribus y tenían las mismas costumbres, prácticas religiosas e idioma. Solamente la ocupación colonial había dado lugar a la frontera entre Tiris occidental y Tiris oriental, dos partes de la misma provincia de Zemmour, y a la subdivisión de otras regiones.

153. En 1884 España, basándose en la Declaración de Berlín, según la cual todo territorio llamado libre podía ser ocupado, informó a las demás Potencias que

asumía el protectorado de la costa occidental del África entre los paralelos 20 y 27. Sin embargo, la frontera entre las "posesiones" francesas y españolas no fue determinada hasta la firma de los convenios de 27 de junio de 1900, 3 de octubre de 1904, y 27 de noviembre de 1912, y aun entonces sólo en forma aproximada. Actualmente los 280.000 kilómetros cuadrados que constituían el Sáhara Español eran considerados como una provincia africana de España y administrados por un departamento del Gobierno español encargado de las provincias africanas. Los saharauís, sin embargo, eran un pueblo amante de la libertad con un deseo innato de independencia. Del mismo modo que creían en la amistad, rechazaban y condenaban la injusticia que entrañaba la dominación de un pueblo por otro. Por tanto, consideraban que el ejercicio de su derecho a la libre determinación, derecho inalienable reconocido por las Naciones Unidas y aceptado por el Gobierno español, era el medio mejor para que pudiesen decidir su futuro en términos amistosos con España.

154. Los saharauís, aunque separados de Marruecos tanto geográficamente como por su forma de vida, sentían un gran respeto por ese país, aun cuando no siempre hubiesen apreciado sus ambiciones expansionistas. Por otra parte, los lazos que los unían a Mauritania eran tan evidentes que no necesitaban ser mencionados. No había diferencia alguna en el aspecto, la indumentaria, ni en ninguna otra característica, entre los saharauís y los mauritanos, y la semejanza estaba reforzada por su actitud y forma de vida comunes, además de los muchos vínculos de sangre existentes entre ellos. La población del Sáhara Español estaba dispuesta, sin embargo, a no mencionar estas verdades fundamentales durante algún tiempo y vería con beneplácito la aplicación del principio de libre determinación. Deseaba instar a quienes se habían mostrado más ansiosos de obtener la liberación del Sáhara Español a que se abstuviesen de utilizar a los saharauís para otros fines que no tenían nada que ver con su deseo de libertad, independencia y paz. Los saharauís eran orgullosos y vigilantes y sabían cuáles eran sus intereses. Preferirían no verse sometidos a la propaganda o envueltos en los asuntos políticos de Marruecos. Querían elegir su propio destino, manteniendo al mismo tiempo los numerosos y sólidos lazos que los ligaban con España, y creían que su futuro estaba profundamente unido al de Mauritania. A pesar de su ardiente oposición al colonialismo, deseaban hacer su elección en paz y con orden, sin derramamientos de sangre y libres de injerencias de falsos amigos.

155. El Sr. Ould Sheikh Malainine dijo en su declaración que los habitantes del llamado Sáhara Español resistieron la colonización española desde que España trató de poner pie en la costa del África y habían librado muchas batallas, en las cuales cayeron numerosos héroes. Contuvieron a los conquistadores hasta 1934, fecha en que España ocupó oficialmente el país. Su resistencia nunca cesó a pesar de que las autoridades coloniales españolas hicieron todo lo posible por dominarlos, destruyendo pueblos, saqueando las propiedades y violando, torturando, condenando al exilio y asesinando a la población. Los españoles trataron de borrar la personalidad africana y árabe del pueblo y de establecer un sistema basado en la supuesta superioridad de los europeos, lo cual, en realidad, equivalía a la discriminación racial y a la persecución de la población autóctona. Mientras ésta era condenada al exilio, las auto-

ridades alentaron la inmigración en masa de españoles, que saquearon la riqueza del Territorio. El pueblo rechazaba unánimemente el destino que le había sido impuesto en esa forma y era también unánime su determinación de expulsar a los colonialistas y lograr la independencia bajo la protección de las Naciones Unidas. No había desacuerdo entre la población, que formaba un frente unido contra el colonialismo. Por lo tanto, el orador exhortó al Comité Especial a que hiciese lo posible para que se tomasen medidas que les permitiesen vivir con libertad y dignidad. Dichas medidas podrían incluir la evacuación de las tropas extranjeras, la suspensión de la inmigración, la libertad de los prisioneros políticos y la vuelta de los refugiados políticos, a las que seguiría el ejercicio del derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

156. Refiriéndose a las declaraciones del Sr. El Abadila Ould Cheikh Mohamed Laghdaf y de los demás peticionarios de su grupo, el representante de España dijo que las declaraciones de los peticionarios habían sido una maraña de mentiras y exageraciones. Cuando se les había pedido información sobre su origen y antecedentes habían contestado con evasivas. El orador deseaba simplemente señalar que Ould Sheikh Malainine era consejero jurídico en Rabat, Marruecos, Hamdi Ould Salek Ould Ba Ali era un califa al servicio de Marruecos en la región de la frontera con Argelia y Brahim Ould Hassena Douihi era califa en Tetuán, Marruecos. Por lo tanto, era bien evidente de dónde procedían.

157. El orador rechazó categóricamente las declaraciones de los peticionarios sobre malos tratos a mujeres y niños. La detallada información puesta a disposición de las Naciones Unidas sobre el régimen español en estos territorios demostraba cuán falsas eran dichas acusaciones.

158. Las cifras que los peticionarios habían dado sobre el número de habitantes y los efectivos de las fuerzas españolas en el Sáhara eran todas falsas. La población del Sáhara Español era de unos 25.000 habitantes. Se estaba realizando un censo y pronto se dispondría de cifras definitivas. Un número reciente de *Jeune Afrique* mencionaba una población de 30.000 habitantes; ésta era con seguridad la estimación más alta posible. Había 9.500 españoles peninsulares en el Sáhara Español y una fuerza militar española de 10.000 hombres, que debido a la vasta extensión del territorio — 280.000 kilómetros cuadrados — era necesaria para cumplir con las obligaciones que imponía a España el Artículo 73 de la Carta.

159. Los peticionarios sabían que en realidad no había habido inmigración en masa al Sáhara Español procedente de España ni expulsión de saharauís. No podían citar una sola disposición en apoyo de sus acusaciones. Sus referencias a una guerra de liberación carecían igualmente de sentido, porque el Territorio estaba tranquilo e iba a ejercer el derecho a la libre determinación. Los peticionarios habían dicho que solamente los españoles tenían privilegios, pero todos los habitantes del Territorio eran españoles y tenían los mismos derechos. La discriminación contra los habitantes autóctonos sería contraria al espíritu de la nación española y a los principios de las Naciones Unidas. Se había establecido claramente, en la información transmitida por España en virtud del inciso e del Artículo 73

de la Carta, que el término “provincia” no implicaba discriminación. Los peticionarios habían hecho también injuriosas acusaciones afirmando que se había suprimido el estudio del idioma árabe. España estaba orgullosa de sus instituciones culturales arábigas. Las controversias entre musulmanes se resolvían de acuerdo con la Justicia Coránica, cuyas leyes escritas y consuetudinarias se aplicaban íntegramente. El orador remitió a los miembros el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véanse los párrs. 1 a 61 *supra*) para mayor información sobre las condiciones existentes en el Sáhara Español. La acusación, formulada por los peticionarios, de que España practicaba la discriminación racial era un insulto intolerable. Los peticionarios habían hablado de la política antiafricana española pero España, que sufrió la dominación colonial durante muchos años, se enorgullecía del enriquecimiento de su cultura por la civilización árabe y nunca había practicado la discriminación racial.

160. En una carta de fecha 8 de septiembre de 1966 (véase el anexo), la delegación de España expuso formalmente su posición sobre la descolonización del Sáhara Español. A pesar de todas las maquinaciones de los peticionarios y de quienes los apoyaban, España estaba dispuesta a afirmar una vez más su voluntad de conceder la libre determinación a la población del Territorio. Había en marcha siniestras maquinaciones, utilizando a personas como los peticionarios, para obtener mediante la intervención lo que ellos sabían que no podría lograrse si se permitía a la población del Territorio expresar libremente su voluntad.

161. El representante de Marruecos dijo que el representante español había negado que los peticionarios representasen realmente al Sáhara Español. Existía, sin embargo, una fuente oficial española que demostraba lo contrario: *Estudios Saharianos*, de Julio Caro Baroja, patrocinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y publicado en 1955 por el Instituto de Estudios Africanos de Madrid. En su introducción a la obra, el autor dijo que debía especial agradecimiento a su excelente intérprete, Braika Ould Ali Moulud Ould Ahmed Lahcen, que le prestó gran ayuda durante su viaje y que era un notable ejemplo de la nueva generación de jóvenes educados bajo la ocupación española.

162. El representante de España había afirmado que Ould Sheikh Malainine no estaba autorizado para representar al Sáhara Español debido a que había prestado servicios como consejero jurídico oficial en Rabat. Esta acusación era fácil de refutar, porque el orador tenía en su poder documentos de la Corte de Apelaciones de Rabat, de fecha 10 de marzo de 1966, en los que se certificaba que el peticionario fue autorizado para la práctica del derecho de Marrakech después de prestar el juramento reglamentario el 18 de febrero de 1966, pero que posteriormente había renunciado a su cargo. Ello significaba que el peticionario era un abogado que practicaba una profesión liberal. El representante español había insinuado que el que el peticionario hubiese residido en Rabat, Casablanca y Marrakech era un delito. Sin embargo, Marruecos se enorgullecía por haber proporcionado asilo a defensores de la libertad, procedentes de todas partes del África, inclusive refugiados del Sáhara Español. Los peticionarios sólo habían mencionado hechos, que podían comprobarse. Fuese cual fuere el disfraz con que se presentaba, el colonialismo era siempre igual en todo el mundo: la opresión del

hombre por el hombre y la dominación de un pueblo por otro.

163. El Sr. Braika Ould Ahmed Lahcen, hablando en nombre de todos los peticionarios de su grupo, dijo que, a diferencia de lo que había afirmado el representante de España, todos los peticionarios eran hijos del Sáhara Español y eran bien conocidos en ese país. El propio orador nació en El Aaiún en 1930 y estudió en Ifni, en El Aaiún y durante algún tiempo en Tetuán. Comenzó a trabajar como intérprete en 1946 en El Aaiún, donde era bien conocido de todos, incluso de los españoles colonialistas. Debido a sus actividades en el movimiento de liberación, se vio obligado a escapar de El Aaiún en 1957, abandonando todos sus bienes y llevando consigo solamente una pequeña cartera con documentos confidenciales. El orador y sus colegas peticionarios lucharon posteriormente contra los españoles y el propio orador fue detenido en diciembre de 1957 y encarcelado en El Aaiún junto con centenares de personas. No disfrutó de ninguna amnistía y fue trasladado posteriormente a la prisión de San Francisco en las Islas Canarias. Después de pasar algún tiempo en diversas prisiones, por último fue puesto en libertad en el continente, pero tuvo que caminar diecisiete kilómetros, sin calzado y sin alimentos, hasta la frontera de Marruecos, donde fue bien recibido. Trabajó en Agadir como abogado, pero no como funcionario del Gobierno. Ningún peticionario era funcionario del Gobierno de Marruecos, sino que todos ellos eran nacionalistas saharauís que tenían como norma dedicar la mitad de sus ingresos a la causa de la libertad. Era cierto que viajaban con pasaporte de Marruecos y que habían llegado a Nueva York desde Dakar, pero ello se debía simplemente a que no tenían ningún otro pasaporte y estaban obligados, necesariamente, a evitar la escala en Madrid. Se encontraban en Nueva York como únicos representantes auténticos de su país, por cuya independencia estaban todos dispuestos a morir.

164. El representante de España había dicho que su Gobierno patrocinaba oficialmente el estudio del idioma árabe en el Sáhara Español. El orador desafiaba a ese representante a que encontrase entre la población nativa una sola persona con certificado de estudios primarios que mostrase su aptitud en la lengua árabe. Era cierto que en las escuelas españolas se enseñaba el hasaní, dialecto local, pero no se trataba del árabe puro, que era la lengua materna de su pueblo. El representante de España había afirmado también que su Gobierno observaba los principios de la justicia en el Sáhara Español; sin embargo, en ese país no existía una auténtica justicia y en los tribunales no se juzgaba ningún caso de conformidad con los principios jurídicos, ni por los magistrados europeos ni por los musulmanes, y estos últimos eran simplemente asesores jurídicos de los primeros. El orador se preguntaba si podía considerarse justicia el que el ejército español llegase a la ciudad sagrada de Smara y quemase una antigua biblioteca que contenía tesoros literarios de varios siglos, y el que se usara la mezquita de esa ciudad como cuartel de los legionarios españoles, mientras los habitantes locales tenían que hacer sus plegarias en su casa o al aire libre.

Declaraciones generales

165. El representante de España dijo que la posición de su país acerca de esta cuestión había quedado

claramente fijada en la carta que su Representante Permanente dirigió el 8 de septiembre de 1966 al Presidente del Comité Especial (véase el anexo). La delegación española esperaba confiadamente que la descolonización del Sáhara pudiese realizarse con rapidez; en cuanto a Ifni, no obstante las peculiaridades que presentaba, los contactos con Marruecos debieran permitir encontrar fórmulas que diesen satisfacción a los intereses en presencia y asegurasen a los habitantes las debidas garantías con respecto a su futuro. Conforme añadía el documento citado, España tenía la firme decisión de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General.

166. El representante de Mauritania señaló que bajo la colonización francoespañola, Mauritania estuvo dividida en dos partes y únicamente la parte colonizada por Francia pudo lograr la independencia, mientras que la parte noroeste del país seguía siendo una colonia española, el Sáhara Español. Esta situación era anormal puesto que, conforme había subrayado su Presidente, Mauritania tenía vocación sahariana; efectivamente, no había duda que geográfica, étnica y económicamente el Sáhara llamado español formaba parte integrante de Mauritania. En una declaración hecha ante el Comité Especial en 1963, el Ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania especificó que el Sáhara llamado español estaba poblado únicamente por tribus moras, nómadas en su mayor parte, a las que nada, ni idioma, ni cultura, ni raza, ni religión, ni costumbres, diferenciaba de las demás tribus que vivían en el noroeste de la República Islámica de Mauritania. Por otra parte, según un documento oficial publicado en 1960 por el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Jerifiano, se comprobaba que Mauritania abarcaba las provincias meridionales de Marruecos comprendidas entre las regiones de Tindouf y de Saguia el Hamra al norte, el Atlántico al oeste y el Río Senegal al sur, y que España había reemplazado la expresión "Mauritania española", por la de "Sáhara Español". Un libro blanco del Gobierno marroquí sobre Mauritania pretendía también que Río de Oro era una región marroquí por la sola razón de que formaba parte integrante de Mauritania, y que el llamado Sáhara Español e Ifni constituían dos regiones distintas que debían ser consideradas separadamente. Mauritania afirmaba que el Sáhara Español formaba parte de su territorio y el tratado de paz y de comercio firmado en Marrakech en 1767 entre los soberanos de España y de Marruecos corroboraba también este punto de vista.

167. Por consiguiente, sobre esta cuestión tan importante, Mauritania tenía una posición muy clara; este país se proponía contribuir a la estabilidad y al mantenimiento de la paz en el mundo, especialmente en su región geográfica y tenía fe en la eficacia del diálogo y en la necesidad de arreglar pacíficamente las diferencias internacionales. La posición de Marruecos no siempre había sido tan clara. Su política a este respecto había variado y, tras de haber acallado sus reivindicaciones sobre la parte independiente de Mauritania, había intensificado tales reivindicaciones sobre la otra parte, o sea el llamado Sáhara Español.

168. En un reciente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Mauritania se indicaba que era importante evitar toda confusión entre dos cuestiones bien definidas: por una parte, la de Ceuta, Melilla e Ifni, cuyo arreglo incumbía a España y a Marruecos, y por otra parte, la del Sá-

hara Español, que debía ser objeto de negociaciones, no entre España y Marruecos, país este cuya soberanía nunca se había ejercido sobre esta zona, sino precisamente entre España y Mauritania, país del que el llamado Sáhara Español formaba parte integrante. Las excelentes relaciones que existían entre el Gobierno mauritano y el Gobierno español permitían esperar un arreglo satisfactorio de la cuestión. Por otra parte, las conversaciones celebradas en marzo de 1966, con motivo de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de España a Mauritania, habían sido alentadoras y Mauritania deseaba una solución que permitiese la integración de esta región en su territorio nacional; sin embargo, si la Potencia Administradora decidía que se aplicase el principio de la libre determinación a los habitantes del Sáhara Español, Mauritania no se opondría a ello. No obstante, en tal caso, con objeto de dar su plena significación a la aplicación del principio de la libre determinación, sería preciso conceder antes la libertad de expresión a los habitantes de Río de Oro y de Saguia el Hamra, bajo la supervisión de observadores internacionales. En tales condiciones el Gobierno y el pueblo mauritanos estaban seguros de cómo decidirían los habitantes de la parte noroeste de Mauritania, conocida por el nombre de Sáhara Español.

169. El representante de Marruecos recordó que la delegación marroquí había puntualizado su posición sobre la cuestión que figuraba en el programa durante la 436a. sesión del Comité Especial celebrada en Addis Abeba el 7 de junio de 1966 y que en aquella ocasión había formulado sugerencias para el arreglo definitivo del problema.

170. Desde su advenimiento a la independencia, Marruecos nunca dejó de formular reservas en los diversos órganos de las Naciones Unidas, y particularmente en el Consejo de Administración Fiduciaria, sobre los territorios no autónomos de Ifni y del Sáhara Español. Al mismo tiempo, había entablado contactos con España, la Potencia Administradora, con la finalidad de hallar una fórmula adecuada para restituir a Marruecos estos Territorios que le fueron arrebatados cuando el propio Marruecos se encontraba bajo los protectorados francés y español. Tras diez años de paciencia y por espíritu de cooperación dentro de las Naciones Unidas, el Gobierno marroquí había decidido someter esta cuestión al Comité Especial, convencido de que éste adoptaría medidas apropiadas para acelerar la concesión de la independencia a estos Territorios de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Tal era el sentido de la declaración marroquí del 7 de junio de 1966 en Addis Abeba. Efectivamente, tanto para Marruecos como para cualquier otro país africano verdaderamente independiente, las poblaciones autóctonas debían hallarse en condiciones de elegir libremente su destino, bien fuera el de permanecer independientes o bien el de integrarse política, económica o constitucionalmente con un país vecino. Sin embargo, si la fórmula de la libre determinación gozaba de la preferencia del Comité Especial, Marruecos no se opondría a ello, con la reserva de que la Potencia Administradora retirase sus fuerzas militares, cuyos efectivos eran actualmente iguales a la población, y pusiese fin a la inmigración organizada de españoles, los cuales, tanto de hecho como de derecho, eran extranjeros en este Territorio y constituían una amenaza para la población autóctona a causa de su dinamismo y de su superioridad técnica y, finalmente, que todos los

refugiados que huyeron de la represión fuesen autorizados para volver y expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias.

171. Por otra parte, cualquiera que fuese la fórmula que el Comité Especial o la Asamblea General adoptasen sobre el porvenir del Territorio, Marruecos insistía en tener una participación efectiva en la vigilancia del mecanismo para realizar la libre determinación. Igual que el representante de Mauritania, el orador creía que era necesaria la supervisión internacional, si se deseaba que el proceso de descolonización se desarrollase en una atmósfera de serenidad y de lealtad. A tal fin sería preciso que la administración española se retirase y dejara que los organismos competentes de las Naciones Unidas garantizaran por sí mismos la aplicación de toda resolución que el Comité Especial pudiese aprobar.

172. El orador abrigaba la esperanza, que ya expresó el 7 de junio de 1966 en Addis Abeba, de que cuando llegase el momento, el Comité Especial aprobase una resolución relativa a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a esta parte del territorio nacional de Marruecos y de que todos sus miembros apoyasen su deseo de que los debates del Comité Especial tuviesen buen fin.

173. El representante de Túnez observó que, no obstante las reservas que contenían, en las declaraciones de España, de Marruecos y de Mauritania había muchos elementos constructivos que podían facilitar una solución rápida del problema. Sugirió por eso, para evitar pérdidas de tiempo, que los miembros del Comité celebrasen consultas oficiosas encaminadas a elaborar un proyecto de resolución que pudiese recibir la aprobación general del Comité Especial.

174. El representante de España señaló que quisiera saber si las observaciones marroquíes sobre la libre determinación se referían al Sáhara Español exclusivamente o a los territorios no autónomos en general. La delegación española sostenía lo que se decía en su carta del 8 de septiembre dirigida al Presidente del Comité Especial (véase el anexo), o sea, que su país era partidario de aplicar en el Territorio del Sáhara Español las resoluciones 1514 (XV) y 2072 (XX) de la Asamblea General. Su delegación hacía observar que los efectivos militares españoles no llegaban a 30.000 hombres y que las poblaciones autóctonas tampoco eran víctimas de medidas represivas.

175. Ifni, era un enclave y planteaba por eso problemas especiales, pero el Gobierno español estaba dispuesto a tomar en consideración todas las sugerencias que pudiese hacer Marruecos, pues sólo deseaba proteger los intereses de la población del Territorio. La delegación española quería subrayar las condiciones particulares que reinaban en Ifni y, sobre todo, el hecho de que España no controlaba la totalidad del Territorio. Recordó sus propuestas, que figuraban en la carta del Representante Permanente (véase el anexo). Le incumbía, pues, a este país emitir una opinión acerca de tales propuestas.

176. El representante de Marruecos dijo que para la delegación de su país, Ifni y el Sáhara Español representaban una sola y misma cuestión, a saber: un problema colonial planteado por la presencia de una Potencia colonial. Los dos Territorios considerados tenían un destino común, de la misma manera que tenían un

pasado común y estaban sometidos a la misma administración colonial. Por su parte, Marruecos consideraba que esos territorios eran territorios marroquíes y que, si había alguna misión que cumplir, le incumbía a Marruecos el cumplirla. Acerca del papel de la Potencia Administradora, el párrafo 5 de la parte dispositiva de la Declaración sobre la concesión de la independencia decía: "En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas."

177. Puesto que España había proclamado varias veces su voluntad de aplicar la Declaración, se le podía pedir que la aplicase íntegramente, sobre todo en lo que respectaba al traspaso de poderes, que, como decía la Declaración, debía estar exento de toda excepción.

178. El representante de España, después de haber declarado que la cuestión del Sáhara Español era diferente de la de Ifni, había precisado que el Gobierno de su país esperaba de Marruecos que hiciese sugerencias acerca de este último Territorio. Si cabía deducir de ello que España reconocía a Marruecos algún derecho sobre Ifni, Marruecos no podría dejar de responder a la invitación que se le hacía. En cambio, si no se le reconocía ninguno, incumbiría dejar al Comité Especial la facultad de actuar. En las actuales circunstancias, Marruecos no podía formular más que una exhortación: que el Territorio fuese liberado de la dominación colonial.

179. El representante de Mauritania, refiriéndose a las condiciones que la delegación marroquí ponía en lo que se refería a la libre determinación de Ifni y del Sáhara Español, manifestó que, para Mauritania, se trataba de dos cuestiones distintas, una de las cuales se basaba en principios y, la otra, en la confianza que se podía tener en el diálogo que había iniciado con España, en la que veía un interlocutor leal.

180. El orador recordó que, en Addis Abeba, durante las sesiones del Comité Especial, Marruecos reclamó la independencia del Sáhara Español. Ahora bien, su representante acababa afirmando que formaba parte integrante del territorio marroquí. Se trataba, pues, de saber lo que el Gobierno marroquí entendía exactamente por "independencia". En efecto, no se podía sentir sino inquietud ante la ambigüedad de sus declaraciones. Había en la actitud de Marruecos una contradicción que interesaba a todos resolver.

181. El representante de Marruecos declaró que su país siempre había deseado que los problemas pendientes se resolviesen por contacto directo con España y que seguiría actuando conforme a este principio. El Gobierno marroquí no tenía nada que ver con el hecho de que Ifni no estuviese enteramente controlado por España. Además, había tomado medidas para mantener el orden en la región.

182. No había incompatibilidad alguna entre el hecho de decir que los territorios de que se trataba eran marroquíes y habían de volver a serlo y el afirmar que habían de ser independientes. Marruecos aducía en este caso el argumento de la independencia convencido de que, cuando Ifni y el Sáhara Español fuesen libres, sabrían escoger el camino que más les conviniese.

183. El representante de Siria manifestó que su país era plenamente partidario de la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara Español. Como el repre-

sentante de Túnez, se congratulaba de que las partes interesadas no sólo asintiesen a iniciar un diálogo, sino que lo preconizasen, y la propia Potencia Administradora estaba a favor de la aplicación rápida e integral de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Como lo habían subrayado las delegaciones de Marruecos y Mauritania, importaba que las poblaciones autóctonas pudiesen manifestar libremente sus aspiraciones y que la Potencia Administradora favoreciese la creación de las condiciones necesarias retirando sus tropas, poniendo fin a la inmigración española y absteniéndose de intervenir en el proceso de libre determinación, lo que no haría sino realzar su prestigio.

184. El representante del Uruguay hizo observar para comenzar que, en su carta de 8 de septiembre de 1966 (véase el anexo), España mencionaba primero la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, cuyos términos aceptaba. No cabía duda, pues, de que España estaba dispuesta a aplicar las disposiciones del párrafo 2 de esa resolución, donde se pide encarecidamente al Gobierno de España que "adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara Español". Por lo demás, la descolonización era susceptible de modalidades distintas según los territorios considerados. Para el representante del Uruguay no cabía la menor duda de que el caso del Sáhara Español era totalmente distinto del de Ifni; y el hecho de que este último Territorio fuese un enclave tenía efectivamente muchísima importancia. La delegación uruguaya aprobaba la propuesta del representante de Túnez, que había declarado que había que dejar a las partes el cuidado de solventar la cuestión y que el Comité Especial debía, por su parte, limitarse a aprobar un proyecto de resolución por el cual se afirmasen los principios en que ya se estaba de acuerdo.

185. El representante del Irán estimaba que había muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo. En efecto, las partes estimaban que había que poner fin a la condición de colonia de los territorios considerados. Dejando eso bien sentado, la delegación iraní juzgaba que se podría adoptar incluso un método diferente para cada caso.

186. El representante del Irán apoyó la propuesta del representante de Túnez que había declarado que, como las partes estaban de acuerdo en ciertos principios, había que redactar un proyecto de resolución que dejase bien sentadas esas cuestiones. El Comité Especial debería examinar cuanto antes la propuesta de Túnez.

187. El representante de Malí opinó que las declaraciones hechas por España en su carta de 8 de septiembre de 1966 (véase el anexo) representaban en cierto sentido el comienzo de la aplicación de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General. Como nadie ponía en tela de juicio ciertos principios, cabía hacerlo constar en una resolución, tal como lo había propuesto el representante de Túnez.

188. El representante de Venezuela se congratuló de que existiesen elementos de acuerdo entre las partes y se asoció a la propuesta de Túnez.

189. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hizo observar que, seis años después de la aprobación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, España seguía haciendo caso omiso de las disposiciones de esa resolución. La política colo-

nial española en Africa se caracterizaba por maniobras dilatorias que las declaraciones de principio no podían disimular. Los territorios que dominaba constituían para España una especie de moneda de cambio. De la misma manera, la política de inmigración seguida en los territorios de que se trataba tenía por objeto facilitar su explotación vergonzosa. España había cedido algunos de los recursos de los territorios a monopolios occidentales que se entregaban a un verdadero pillaje. El Comité Especial debía actuar para impedirle que vendiese al mejor postor los territorios que todavía administraba y exigir con tal objeto la aplicación inmediata de las resoluciones 1514 (XV) y 2072 (XX) de la Asamblea General.

190. El representante de España declaró que, manifiestamente, el representante de la URSS ignoraba totalmente la posición y la actitud de España en materia colonial. En su actuación, España no se apoyaba en nadie y se inspiraba únicamente en los principios que regía la razón. La política a que se refería el representante de la URSS era enteramente ajena a España.

191. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la delegación de su país deseaba poner al descubierto ciertos hechos concretos de la colonización española de Ifni y del Sáhara. En efecto, siempre había que apoyarse en datos de esa índole para liberar a los territorios coloniales de la dominación de las Potencias extranjeras.

F. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

192. En su 474a. sesión, el representante de Túnez presentó un proyecto de resolución conjunto (A/AC.109/L.351) de la que fueron finalmente autores Afganistán, Costa de Marfil, Irán, Madagascar, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra Leona y Túnez.

193. En la 478a. sesión, los autores sometieron un texto revisado del proyecto de resolución (A/AC.109/L.351/Rev.1). Otras modificaciones fueron introducidas oralmente en las 478a. y 479a. sesiones.

194. Presentando el proyecto de resolución, el representante de Túnez dijo que el texto era el resultado de largas y laboriosas negociaciones, durante las cuales los representantes de Marruecos y Mauritania habían hecho una serie de concesiones y habían manifestado gran cooperación. El proyecto de resolución se refería a los dos Territorios por separado. El párrafo 1 de la parte dispositiva concernía a Ifni; la Organización de la Unidad Africana (OUA) había aprobado una resolución similar. En el párrafo 2 de la parte dispositiva se pedía a la Potencia Administradora que preparase a la población autóctona del Sáhara Español para la libre determinación y la independencia; y en el párrafo 3 de la parte dispositiva se invitaba a la Potencia Administradora a que consultase a Mauritania, Marruecos y a la población del Sáhara acerca de la manera de celebrar un referéndum en el Territorio para determinar los deseos de la población, mientras en el párrafo 4 de la parte dispositiva se pedía a Mauritania, Marruecos y a toda otra parte interesada que colaborasen a la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Argelia y Malí, por ejemplo, quizás también podrían ayudar. El orador esperaba que el problema de los dos Territorios se pudiese resolver rápidamente y que el proyecto de resolución se aprobara por gran mayoría.

195. El representante de Sierra Leona, hablando como coautor del proyecto de resolución, manifestó que el proyecto no era perfecto, pero que las delegaciones más interesadas habían hecho grandes sacrificios para ponerse de acuerdo en un texto. Era importante garantizar que los habitantes de los dos Territorios pudiesen ejercer su derecho de libre determinación y alcanzar la independencia lo antes posible.

196. El representante de la Costa de Marfil manifestó la gratitud de la delegación de su país a las delegaciones de Mauritania y Marruecos por su continua cooperación durante las consultas acerca del texto. El orador agradecía que la Potencia Administradora hubiese decidido aplicar plenamente las disposiciones de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, como se indicaba en el último párrafo del preámbulo. Refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva, deseaba aclarar que los coautores tenían entendido que el traspaso de poderes en Ifni debía efectuarse en conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, especialmente con las del párrafo 5 de la parte dispositiva de esta resolución, que especifican que todos los poderes se habrán de traspasar a los pueblos de los Territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, para permitirles que gocen de una libertad y una independencia absolutas. El orador reafirmó ese principio y añadió que estaba seguro de que todos los miembros del Comité Especial compartirían su opinión.

197. El representante de Malí manifestó que, como coautor del proyecto de resolución apoyaba las declaraciones de los oradores anteriores y recomendaba el texto a la aprobación del Comité Especial. Era importante subrayar el hecho de que la Potencia Administradora estaba adoptando medidas para cumplir sus obligaciones y aplicar la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General. El orador estaba convencido de que la Potencia Administradora, en consulta con Marruecos, Mauritania y toda otra parte interesada, resolvería bien el problema del Sáhara Español, pero era importante que el pueblo del Territorio se hallase en condiciones de ejercer su derecho de libre determinación sin traba alguna.

198. El representante de Túnez había hablado de Malí como uno de los países que podrían estar particularmente interesados en la cuestión del Sáhara Español. Lo que le interesaba a Malí era poner fin al colonialismo conforme a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El representante de Malí se refiere a las declaraciones hechas por el Presidente de su país en la OUA en 1963, en las que éste invitó a todos los Jefes de Estado africanos a que se atuvieran a las fronteras territoriales establecidas cuando los colonialistas salieran de los países de África. Malí no tenía la más mínima intención de anexarse ningún territorio, y no deseaba más que la paz y la seguridad en África y en el mundo entero.

199. El representante de España estimó que, dado que la Cuarta Comisión iba a discutir más adelante el mismo tema del programa que se estaba considerando ahora, el Comité Especial no debía comenzar un largo debate en la fase actual, y añadió que resultaría difícil tomar una decisión importante sin un debate minucioso.

200. Como España había manifestado repetidas veces su decisión de conceder la independencia al Sáhara Español, el representante consideraba que el lenguaje

del párrafo 2 de la parte dispositiva era algo apremiante.

201. El representante de España señaló que, en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, se invitaba a su país a que consultase a Mauritania, Marruecos y la población del Sáhara acerca de las modalidades de celebrar un referéndum. Añadió que la población del Sáhara debería haber sido mencionada en primer lugar, puesto que tenía derecho a decir la primera y la última palabra acerca del porvenir de su Territorio.

202. El representante de Argelia declaró que la desaparición del colonialismo en África iba a contribuir a eliminar fuentes potenciales de conflicto en ese continente y que ello era una condición para la paz y la prosperidad en el mundo entero. Su país había luchado infatigablemente contra el colonialismo por alcanzar la independencia y, por consiguiente, apoyaba a todos los pueblos que exigían su libertad y su independencia. Ello era especialmente cierto en el caso del supuesto Sáhara Español, con cuyos habitantes su país tenía estrechas relaciones de sangre, tradición y cultura. De hecho, las tribus reguibat eran nómadas y durante siglos enteros habían errado en busca de pastos por toda la región constituida por el sur del Sáhara argelino, Marruecos, Mauritania y lo que se conocía con el nombre de Sáhara Español. Era natural que Argelia se interesase particularmente en el porvenir de un país con el que tenía fronteras comunes y en el que había tribus que pasaban varios meses del año en territorio argelino, pues había de influir muchísimo en la seguridad de toda la región y, por ende, en la parte afectada del territorio nacional de su país. Argelia había luchado muchos años por reconquistar su integridad y lograr la independencia, y su único anhelo era establecer buenas relaciones de amistad con todos los Estados, particularmente con los que tenían fronteras con ella. Ese era uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de la OUA.

203. Desde su creación, el Comité Especial había trabajado infatigablemente por lograr la descolonización y por persuadir a las Potencias coloniales de que habían de aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. La delegación de Argelia apoyaba las opiniones manifestadas por las delegaciones de Marruecos y Mauritania en Addis Abeba acerca del porvenir del Sáhara Español. Consideraba que España debería ajustarse a las nuevas realidades de África y establecer las condiciones necesarias para que los habitantes autóctonos pudieran ejercer su derecho sagrado de libre determinación y alcanzar su independencia. Ese era el único proceder que permitiría a todas las partes interesadas resolver de una manera definitiva el problema del porvenir del Territorio. La delegación de Argelia esperaba que el Territorio fuese un factor de la armonía y la paz que tanto necesitaba África.

204. El representante de Marruecos manifestó la gratitud de su delegación a los miembros africanos del Comité Especial por el sostenido esfuerzo que habían hecho por redactar un proyecto de resolución que fuese aceptable para todas las partes interesadas. También deseaba elogiar a las partes interesadas por su espíritu de comprensión.

205. Marruecos ya había dado a conocer su posición con respecto al problema. Recordó que en la 436.ª sesión del Comité Especial la delegación marroquí había dicho que, en armonía con el espíritu de descoloniza-

ción, los miembros deberían supeditar las consideraciones de orden nacional a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en la liberación del supuesto Sáhara Español. Marruecos mantenía estrechas relaciones con el pueblo del Territorio y estaba tratando, desde que alcanzó la independencia, de facilitar la solución del asunto en las Naciones Unidas y bilateralmente con España. Después de diez años de esfuerzos había supeditado sus consideraciones de orden nacional a la necesidad de actuar dentro del marco de la descolonización tal como lo definen las Naciones Unidas. Desde junio de 1966, Marruecos encarecía que se permitiera al pueblo del Territorio ejercer su derecho de independencia y de libre determinación. Añadió que su delegación tomaba nota de que la Potencia Administradora había manifestado su intención de aplicar la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General.

206. Aunque en el proyecto de resolución conjunto no se incluían todos los argumentos aducidos por la delegación de Marruecos, el orador consideraba que permitiría a los habitantes del Territorio ejercer su derecho de libre determinación. Señaló que su país había hecho una concesión importante al consentir que el Territorio de Ifni se considere separadamente de la cuestión del Sáhara Español. Marruecos tenía considerables razones de orden jurídico e histórico para defender sus reivindicaciones, pues los dos Territorios eran marroquíes.

207. La delegación de Marruecos consideraba que el Territorio de Ifni no presentaba ningún problema imposible de resolver, pues España siempre se había declarado partidaria de solucionar la situación de este Territorio. El Gobierno de Marruecos había tomado nota de las buenas intenciones del Gobierno de España y esperaba que ese país adoptara una actitud decisiva que permitiese resolver de una manera definitiva dicho asunto.

208. Por consiguiente, la delegación de Marruecos estimaba aceptable el proyecto de resolución y esperaba que todos los miembros del Comité lo apoyaran.

209. El representante de Mauritania dijo que lamentaba que, al presentar el proyecto de resolución, el representante de Túnez no hubiese aclarado que la delegación de Mauritania aceptaba dicho texto con algunas reservas. Sin embargo, como varias delegaciones habían manifestado su apoyo al proyecto de resolución, la suya no insistiría en sus reservas.

210. Añadió que su delegación se congratulaba de la decisión de que las dos cuestiones se considerasen por separado. Señaló que eso no representaba una concesión de Marruecos a la realidad, sino a la historia.

211. La Potencia Administradora había subrayado la necesidad de respetar el principio de libre determinación. En el sentir de la delegación de Mauritania la Potencia Administradora debería decidir el procedimiento para hacer efectivo ese principio en el Territorio, habida cuenta del modo de vida de los habitantes autóctonos.

212. El representante de Siria felicitó a los coautores del proyecto de resolución por todo lo que habían hecho para poner de acuerdo a las partes; además, rindió tributo al espíritu de cooperación de las delegaciones de Túnez, España, Marruecos y Mauritania.

213. El representante de la República Unida de Tanzania se congratuló de las declaraciones del repre-

sentante de España de que su Gobierno estaba dispuesto a aplicar la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General. Precisamente gracias a la actitud alentadora de España habían podido los patrocinadores redactar el proyecto de resolución.

214. Ninguna de las partes interesadas podía estar enteramente de acuerdo con los términos del proyecto de resolución y la delegación de Tanzania podía comprender perfectamente que hubiese reservas. Sin embargo, era alentador que las distintas partes interesadas hubiesen hecho concesiones. Lo importante era que se aplicara el proyecto de resolución y que se terminara el proceso de descolonización de África que ya estaba durando demasiado. El Comité Especial y las partes interesadas deberían tener en cuenta los intereses de los habitantes del Territorio.

215. El representante de Argelia dijo que lo que se estaba diciendo era que el pueblo del Territorio debería poder ejercer sin trabas su derecho de libre determinación y alcanzar la plena independencia. Las largas y laboriosas negociaciones que habían precedido a la redacción del proyecto de resolución demostraban cuán complejo era el problema. Aparte de su posición acerca de la descolonización, el Gobierno de Argelia se adhería al principio de las relaciones de buena vecindad, que los Miembros de las Naciones Unidas habían suscrito al firmar la Carta. El objetivo primordial de la delegación de su país era que el pueblo del Territorio alcanzara la libertad y la independencia.

216. El representante de Uruguay manifestó que el Gobierno de su país siempre había estado profundamente convencido de que los Territorios coloniales en cualquier parte del mundo debían ser liberados. La libre determinación del pueblo del Sáhara Español era un asunto que habían de considerar muy en serio los países cuyos territorios lindaban con el del mencionado Sáhara Español, en vista de los amplios y frecuentes movimientos nómadas de sus habitantes. No bastaba con descolonizar el Territorio; su pueblo había de poder vivir en paz con sus vecinos.

217. El representante de Italia alabó los esfuerzos realizados por varias delegaciones para llegar a un proyecto de resolución aceptable para todas las partes. Era lamentable quizá que en las consultas anteriores a la presentación del proyecto de resolución no se hubiese incluido a la Potencia Administradora, sobre la cual recaía la responsabilidad primordial por la descolonización de Ifni y el Sáhara Español, y la delegación de Italia esperaba que la delegación de España pudiese apoyar ese texto.

218. Se habían expresado ciertas reservas sobre la conveniencia de que el Comité Especial aprobase una resolución sobre esa cuestión, dado que la Asamblea General llevaba casi dos meses reunida y había comenzado ya un debate acerca de los dos Territorios en la Cuarta Comisión. En vista de los considerables esfuerzos hechos por el Comité Especial para llegar a una decisión, quizás no fuese desacertado aprobar el proyecto. El orador lamentaba, no obstante, que el Comité Especial no hubiese esperado a oír a los demás peticionarios, que llegarían a Nueva York próximamente.

219. La delegación de España había afirmado correctamente que el Comité Especial tenía el mandato especial de informar sobre la aplicación de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General. Si el segundo considerando del proyecto de resolución se hubiera

dividido en dos partes, en la primera de las cuales se leyese: “*Habiendo oído* las declaraciones hechas respecto a esos dos Territorios por los representantes de la Potencia Administradora y tomando nota de la carta del Representante Permanente de España en las Naciones Unidas de fecha 8 de septiembre de 1966”, y en la segunda: “*Habiendo oído* las declaraciones hechas por los representantes de Mauritania, Marruecos y Argelia”, el texto se habría ajustado mejor a la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General y habría sido más fácil para la delegación de España aceptar ese proyecto de resolución.

220. Al examinar los problemas de la descolonización, el Comité Especial se enfrentaba siempre a un conflicto entre el realismo y la fidelidad a los principios. En el caso que ocupaba al Comité había prevalecido el realismo, pues en el proyecto de resolución se tomaba nota de que había varios Estados Miembros directamente interesados en el porvenir de los Territorios, porvenir que, conforme a los principios, debería decidirse solamente de acuerdo con la voluntad de su población autóctona. Si bien la delegación de Italia había puesto siempre de relieve la necesidad de un criterio realista en la solución de los problemas políticos, cabía preguntarse si no habría sido aconsejable, por razones de principio, haber puesto más de relieve en el proyecto de resolución la necesidad de averiguar la opinión, y salvaguardar los intereses, de los autóctonos de los Territorios. El aspecto realista podría haberse satisfecho pidiendo la cooperación de los Estados vecinos, que era indispensable para consultar a los habitantes nómadas de los Territorios.

221. La delegación de Italia preguntaba también si, en vista de que los Territorios podían considerarse incluidos en la categoría de pequeños territorios por su población, no hubiese convenido hacer referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General.

222. La delegación de Italia tenía también ciertas dudas en cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, pues consideraba que la Potencia Administradora podía tener ciertas dificultades en cuanto a la determinación de “toda otra parte interesada”.

223. A pesar de las dudas que había expresado el orador, su delegación votaría a favor del proyecto de resolución y esperaba que el proceso de descolonización en los dos Territorios contribuyese a promover la paz y la estabilidad en la región.

224. El representante de España recordó que su delegación había señalado en sesiones anteriores ciertos defectos en el proyecto de resolución. Preferiría que los dos Territorios fueran tratados en resoluciones separadas, y esperaba que la Cuarta Comisión siguiese su decisión anterior sobre ese punto.

225. Señaló que el nuevo párrafo del preámbulo agregado por los autores del proyecto de resolución se aplicaba solamente a los peticionarios del Sáhara Español.

226. En resoluciones anteriores relacionadas con el traspaso de poderes a la población de los Territorios no autónomos se había solido invitar a la Potencia Administradora y al Gobierno del Territorio a que celebraran consultas teniendo en cuenta los intereses de la población. Al apartarse de esa tradición en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el Comité Especial rebasaba sus facultades. La referencia en el párrafo 3 de la parte dispositiva a otros países

carecía también de precedentes. El mandato sagrado que España había aceptado en virtud del Artículo 73 de la Carta la obligaba a promover el bienestar de los habitantes de los Territorios, mientras que el párrafo 3 de la parte dispositiva sometía a transacción los intereses de éstos. El Gobierno español estaba dispuesto a conceder a los habitantes de los Territorios el derecho a la libre determinación, pero no creía que el ejercicio de ese derecho debiera estar sometido a la influencia de la intervención extranjera.

227. El representante de Chile declaró que su delegación aprobaba en general el proyecto de resolución y votaría a favor del mismo. No obstante, tenía dudas sobre la referencia que se hacía en el párrafo 3 de la parte dispositiva a los países a los que debería consultarse para determinar las modalidades de la celebración de un referéndum. La delegación de Chile comprendía los intereses importantes y legítimos de esos países pero consideraba que los mismos deberían entrar en juego solamente una vez que se hubiese independizado la población del Sáhara Español. Pidió, por consiguiente, que se sometiera a votación separada el párrafo 3 de la parte dispositiva y añadió que su delegación se abstendría de votar sobre dicho párrafo.

228. El representante de Australia dijo que su delegación habría preferido disponer de más tiempo para examinar las declaraciones de los peticionarios. Por lo tanto, se abstendría de votar sobre el proyecto de resolución, sin perjuicio de su posición futura sobre la cuestión, después de un examen más detenido de la misma.

229. El representante de Uruguay apuntó que le parecía muy lamentable que el Comité Especial hubiese decidido someter a votación el proyecto de resolución sin disponer aún de toda la información necesaria. Afortunadamente, las delegaciones podrían decidir posteriormente su actitud en la Cuarta Comisión, una vez que tuviesen pleno conocimiento de todos los hechos.

230. La delegación del Uruguay compartía el punto de vista de la delegación de Italia en cuanto al principio de la responsabilidad exclusiva de la Potencia Administradora, y de la conveniencia de dividir el segundo párrafo del preámbulo en dos párrafos distintos. En el párrafo 1 de la parte dispositiva no se hacía ninguna referencia a la necesidad de tener en cuenta los intereses de la población, principio fundamental de la descolonización. Además, la referencia al Gobierno de Marruecos en el párrafo 1 debería figurar en un párrafo separado, pues la responsabilidad básica en cuanto a la modalidad del traspaso de poderes correspondía a España. La delegación del Uruguay apoyaba resueltamente el párrafo 2 de la parte dispositiva, pero tenía ciertas reservas con relación al párrafo 3, por el cual se establecía un complejo sistema de intereses; no estaba claro cuál de ellos debería prevalecer. El invitar a la Potencia Administradora a celebrar consultas con los Gobiernos de Mauritania y de Marruecos para determinar las modalidades de la celebración de un referéndum era una posición poco equitativa no solamente con respecto a la Potencia Administradora sino también de la población autóctona del Sáhara Español. Además, esas consultas demorarían aún más el ejercicio del derecho a la libre determinación por la población. Por consiguiente, la delegación del Uruguay se abstendría de votar sobre el proyecto de resolución.

231. El representante de Venezuela dijo que su delegación había considerado siempre que el principio de

la libre determinación era el derecho de un pueblo a determinar su propio porvenir político y consideraba que los intereses de ese pueblo tenían precedencia sobre cualquier otro interés en el proceso de descolonización. Por consiguiente, veía con asombro que ni en el párrafo 1 ni en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se había incluido alguna referencia a los intereses de la población del Territorio. Añadió que votaría a favor del proyecto de resolución, en la inteligencia de que quedaría constancia de esas reservas.

232. En la 479a. sesión, el Comité Especial votó sobre el proyecto de resolución. El párrafo 3 de la parte dispositiva se sometió a votación separada y fue aprobado por 16 votos contra ninguno y 6 abstenciones. El proyecto de resolución (A/AC.109/351/Rev.1), según quedó enmendado verbalmente, fue aprobado por 19 votos contra ninguno y 3 abstenciones.

233. En explicación de voto el representante de Dinamarca declaró que su delegación estaba totalmente de acuerdo con el fondo del proyecto de resolución, y por consiguiente había votado a favor. Tomaba nota de que en el párrafo 2 de la parte dispositiva de dicha resolución se afirmaba el derecho de la población autóctona del Sáhara Español a la libre determinación y la independencia. Sin embargo, tenía reservas en cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, pues el invitar a la Potencia Administradora a que celebrara consultas con determinados Estados podría prejuzgar la condición jurídica futura del Territorio.

234. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que su delegación creía firmemente en el derecho de la población del Sáhara Español a la libre determinación y se había abstenido de votar sobre el proyecto de resolución dado que, para que la resolución tuviera alguna probabilidad de éxito, tendría que satisfacer las aspiraciones de la población autóctona y contar con el apoyo de todas las partes interesadas, incluso de las naciones que tenían intereses legítimos en el destino de los Territorios.

235. El representante del Reino Unido dijo que su delegación había votado a favor del proyecto de resolución a pesar de tener ciertas reservas sobre el párrafo 1 de la parte dispositiva en vista de que no se hacía ninguna referencia a los intereses de la población — fundamentales con arreglo a la Carta — y de que se incluía una referencia no del todo clara a la resolución 1514 (XV). El texto trataba además ciertas cuestiones que interesaban sobre todo a la Potencia Administradora. El orador lamentó que se hubiese cerrado el debate antes de oír a todos los peticionarios.

236. El representante de Mauritania felicitó al Comité Especial por haber aprobado el proyecto de resolución y dijo que, a juicio de su delegación, si bien Marruecos estaba interesado en el Territorio de Ifni no tenía interés en el llamado Sáhara Español.

237. El representante de Marruecos indicó que, al haberse aprobado la resolución por unanimidad, quedó demostrada la solidaridad de las naciones de Europa, África, Asia y América Latina con los pueblos africanos deseosos de libertad, y su unión para procurar el triunfo de la justicia, el derecho y los principios de la Carta.

238. Por su parte, Marruecos contribuiría con espíritu de amistad y cooperación a la positiva aplicación

de esta resolución, para que la descolonización de los territorios de que se trataba se desarrollara en orden, paz y armonía y en forma que respondiera a los legítimos deseos del pueblo, que aspiraba a la dignidad, el progreso y el bienestar, sin perjuicio para los derechos legítimos de nadie. Como todos los países que luchaban contra el colonialismo, Marruecos pensaba que la descolonización sólo servía a la causa de la paz en el contexto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

239. En lo referente al párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución aprobada por el Comité Especial, Marruecos estimaba que la descolonización de Ifni debería ajustarse al párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, le parecía que la cuestión del Sáhara bajo administración española, en la medida en que concernía a otra parte que no era el propio pueblo del Territorio, interesaba exclusivamente a Marruecos, que no reconocía validez a ningún derecho que circunstancialmente se atribuyeran otras partes.

240. El orador esperaba que se tomase nota de que el espíritu de transacción reflejado en la resolución del Comité no afectaba la convicción de que este Territorio, parte integrante de Marruecos desde tiempo inmemorial, debería gozar sin trabas de su derecho a la libertad e independencia, con ayuda de las Naciones Unidas. Con esas reservas su delegación había aceptado ese texto de transacción. Marruecos estaba dispuesto a cooperar con la Potencia Administradora, en cumplimiento de la resolución, para que los territorios de Saguia el Hamra, Río de Oro e Ifni se independizaran sobre esta base en interés del pueblo autóctono.

241. El representante de Mauritania señaló que había expresado ya su opinión acerca de la resolución aprobada por el Comité Especial y que no le sorprendía lo que acababa de decir el representante de Marruecos, porque era sabido que ese país reclamaba el llamado Sáhara Español como antes reivindicara territorio de Mauritania, según lo demostraba un documento oficial al que el Gobierno de Marruecos había dado en 1960 difusión mundial.

242. El orador deseaba dejar expresa constancia de que Ifni era un territorio completamente separado y distinto del Sáhara Español, con el que nada tenía que ver, y de que esperaba que el Comité tomara debidamente en cuenta ese hecho. Mauritania confiaba en que se facilitaría al pueblo de esos territorios el ejercicio de su derecho a la libre determinación, y tomaba nota de que la Potencia Administradora se había comprometido a hacerlo. Pidió que no se tratara el ejercicio de ese derecho complicando la situación con problemas ajenos a los deseos del pueblo y que, con el acuerdo de la Potencia Administradora, se permitiera a ese pueblo decidir libremente su destino.

243. El texto de la resolución (A/AC.109/214) aprobada por el Comité Especial en su 479a. sesión, celebrada el 16 de noviembre de 1966, es el siguiente:

“El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

“Habiendo examinado el tema de su programa relativo a Ifni y al Sáhara Español,

"Habiendo oído las declaraciones hechas respecto a esos dos Territorios por los representantes de la Potencia Administradora, Mauritania, Marruecos y Argelia,

"Habiendo oído a los peticionarios,

"Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960,

"Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 2072 (XX), aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1965,

"Tomando nota de que la Potencia Administradora ha decidido aplicar plenamente lo dispuesto en la resolución 2072 (XX),

"1. Invita a la Potencia Administradora a acelerar el proceso de descolonización del territorio de Ifni y a convenir con el Gobierno de Marruecos las modalidades del traspaso de poderes, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV);

"2. Pide a la Potencia Administradora que cree sin demora condiciones adecuadas para asegurar el ejercicio de los derechos de la población autóctona del Sáhara Español a la libre determinación y la independencia;

"3. Invita a la Potencia Administradora a fijar, en consulta con la población del Sáhara, con los Gobiernos de Mauritania y Marruecos, y con toda otra parte interesada, las modalidades de la celebración de un referéndum que se realizará con los auspicios de las Naciones Unidas a fin de que la población autóctona del Territorio pueda ejercer libremente su derecho a la libre determinación, y a informar al respecto al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, antes de la celebración de dicho referéndum;

"4. Pide al Secretario General que vele por la aplicación de esta resolución y que presente un informe al Comité Especial."

ANEXO

[A/AC.109/202]

Carta de 8 de septiembre de 1966 dirigida al Presidente del Comité Especial por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas

1. En mi comunicación de 28 de junio de este año, dirigida al Excmo. Secretario General con el ruego de que la hiciera llegar al Funcionario Encargado del Departamento de Fidei-

comisos y Territorios no Autónomos, y como respuesta a la que desde Addis Abeba me dirigió el señor M. E. Chacko con fecha 9 de junio*, anunció que el Gobierno español informaría oportunamente al Comité Especial acerca de su actitud y sus propósitos sobre el cumplimiento de la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, relativa a Ifni y al Sáhara Español. Hoy tengo el honor de presentar a V. E. la información anunciada.

SAHARA ESPAÑOL

2. Sabe el Comité Especial que el Gobierno de España se ha mostrado partidario de aplicar el principio de autodeterminación en el territorio del Sáhara Español, según consta en la carta oficial que dirigí el 30 de abril de 1964 al entonces Presidente de ese organismo, Excmo. Sr. Sori Coulibaly, Embajador, Representante Permanente de Malí. Por ello, hemos tomado nota, con satisfacción, de que otros países que hasta ahora habían expresado criterios opuestos a la aplicación del mencionado principio en el aludido territorio del Sáhara, se manifestaron favorables a ella en la reunión 436 que el Comité Especial celebró el día 7 de junio de este año en la capital de Etiopía. Así se podrá cumplir la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, mediante la libre autodeterminación de los saharauís, que es lo que el Gobierno de España ha venido propugnando.

3. A estos efectos, mi Gobierno está en contacto con la población del Sáhara y lleva activamente a cabo los preparativos necesarios a fin de que ella pueda expresar su voluntad sin presiones de ninguna índole. Dichos preparativos han requerido cierto tiempo por el carácter nómada de los habitantes del desierto y por las particularidades del Territorio.

IFNI

4. En cuanto a Ifni, el Gobierno español, siempre asistido del espíritu de cooperación internacional y fiel a la doctrina de la descolonización, no puede menos de señalar a la atención del Comité la situación irregular en que se halla el citado enclave, en parte de cuyo territorio se encuentra España con dificultades para ejercer su autoridad, pese a los Tratados que definen claramente sus derechos, y ello por circunstancias de todos conocidas, de las que el Gobierno español no es responsable. A pesar de todo, por las peculiaridades que presenta este problema, serían aconsejables, quizás, contactos con Marruecos, cuyo primer objetivo fuese la restauración de la legalidad quebrantada, como necesario paso previo, en la práctica, para buscar fórmulas que dieran satisfacción a los intereses en presencia, y permitieran que los habitantes de Ifni lograsen, tanto respecto a su futuro general como a su destino individual, seguridades firmes, debidamente garantizadas.

5. Creo, señor Presidente, que con lo que dejo expuesto en esta carta, advertirá el Comité cuán firme y clara es la decisión española en orden al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General.

* En la carta de 9 de junio de 1966 se transmitía el texto del consenso sobre Ifni y el Sáhara Español aprobado por el Comité Especial en su 436a. sesión.

CAPÍTULO XI*

GIBRALTAR

A. MEDIDAS ADOPTADAS ANTERIORMENTE POR EL COMITÉ ESPECIAL Y POR LA ASAMBLEA GENERAL

1. Después de haber examinado el problema de Gibraltar en sus sesiones de 1964, el Comité Especial, el 16 de octubre de 1964, aprobó un consenso tal como

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.8.

figura en su informe a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. X, párr. 209). En sus sesiones celebradas en 1965, el Comité Especial incluyó información pertinente sobre

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

el Territorio en su informe a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1², cap. XI).

2. El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó la resolución 2070 (XX) que, en los párrafos de su parte dispositiva, dice lo siguiente:

"[La Asamblea General]

"1. *Invita* a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a iniciar sin demora las conversaciones previstas según los términos del consenso aprobado el 16 de octubre de 1964 por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"2. *Pide* a ambos Gobiernos que informen sobre el resultado de sus negociaciones al Comité Especial y a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones."

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

3. Los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimotercero, decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones contienen información relativa al Territorio³. A continuación se proporciona información suplementaria⁴.

Generalidades

4. La población civil de Gibraltar era de 24.485 habitantes a fines de 1964, distribuidos en la forma siguiente: gibraltareños, 18.615; otros británicos, 4.153, y extranjeros, 1.717.

Evolución política y constitucional

5. Después de las elecciones para nombrar a los once miembros del Consejo Legislativo en 1964, se formó un Consejo de Ministros formado por un Ministro Jefe y cinco otros Ministros. En julio de 1965, el Ministro Jefe convino en formar una coalición con la oposición independiente. El jefe de la oposición fue nombrado Ministro sin cartera y adjunto al Ministro Jefe.

Correspondencia entre España y el Reino Unido

6. El 17 de enero de 1966 el Ministro de Asuntos Exteriores de España dirigió una nota al Embajador británico en Madrid⁵, en la que declaraba que el Gobierno español estaba dispuesto a iniciar sin demora las negociaciones con el Gobierno del Reino Unido, en

los términos expuestos en la resolución de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1965, con objeto de buscar una solución definitiva al problema de Gibraltar.

7. En una nota de fecha 14 de febrero de 1966⁶, la Embajada británica en Madrid informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que el Gobierno del Reino Unido estaba también dispuesto a iniciar dichas conversaciones. La Embajada había recibido instrucciones de proponer que las conversaciones comenzaran en Londres en una fecha del mes de abril de 1966, de mutua conveniencia.

8. En una nota verbal de fecha 23 de febrero de 1966⁷, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó a la Embajada británica en Madrid que el Gobierno español aceptaba la propuesta del Gobierno del Reino Unido de que las negociaciones se realizaran en Londres en una fecha que conviniera a los dos Gobiernos. El Ministerio se ponía a disposición de la Embajada británica en Madrid con objeto de establecer la fecha de mutuo acuerdo.

Condiciones económicas

9. La economía de Gibraltar depende en gran parte de la industria del turismo, de las reexportaciones y del trabajo provisto por el astillero, los departamentos de las fuerzas armadas, el Gobierno y el Consejo de la Ciudad. El Territorio no tiene agricultura ni otros recursos de materias primas. La industria local se limita principalmente a una fábrica de conserva de frutas y pescado, a la elaboración de tabaco, la mezcla de café y la manufactura de ropa.

10. El valor de las importaciones en 1964 ascendió a 14.928.148 libras esterlinas, de las cuales 2.894.419 libras correspondieron a productos alimenticios. Las reexportaciones sujetas a derechos de aduana ascendieron en el mismo año a 4.710.478 libras esterlinas. La exportación de mercaderías de origen local es insignificante.

11. Las principales fuentes de ingresos del Gobierno son los derechos de aduana, los permisos y los impuestos sobre el consumo, las costas judiciales, la renta de propiedades del Gobierno y las loterías del Gobierno. El impuesto a los réditos representa cerca del 14% de los ingresos. En 1964 los ingresos totales ascendieron a 2.086.556 libras esterlinas y los gastos a 2.407.298 libras, de las cuales 1.913.298 libras correspondían a los gastos recurrentes. El Consejo de la Ciudad tiene sus finanzas por separado; en 1963 los ingresos y los gastos ascendieron aproximadamente a 1 millón de libras esterlinas.

12. En julio de 1965 se anunció que se proporcionaría 1 millón de libras como subsidio de los Colonial Development and Welfare Grants para el desarrollo de Gibraltar en los próximos tres años, así como otras 200.000 libras esterlinas en préstamos de la Tesorería, si fuesen necesarias. Además, se facilitarían 100.000 libras como subsidio especial de ayuda al presupuesto de Gibraltar para 1965.

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, *Anexos*, adición al tema 23 del programa.

³ *Ibid.*, decimotercero período de sesiones, *Anexos*, adición al tema 23 del programa, documento A/5446/Rev.1; *ibid.*, decimonoveno período de sesiones, *Anexos*, anexo No. 8 (parte I), documento A/5800/Rev.1; *ibid.*, vigésimo período de sesiones, *Anexos*, adición al tema 23 del programa, documento A/6000/Rev.1.

⁴ La información ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 2 de diciembre de 1965, para el año terminado el 31 de diciembre de 1964.

⁵ El texto de la nota fue transmitido al Secretario General, en carta de fecha 20 de enero de 1966, por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas (A/6242, anexo I).

⁶ El texto de la nota verbal fue transmitido al Secretario General, en carta de fecha 2 de marzo de 1966, por el representante del Reino Unido (A/6278).

⁷ El texto de la nota verbal fue transmitido al Secretario General, en carta de fecha 2 de marzo de 1966, por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas (A/6277).

Condiciones sociales

Mano de obra

13. Las estadísticas de la mano de obra se refieren únicamente a las personas que desempeñan un trabajo manual y a otros trabajadores cuya remuneración no excede de 500 libras esterlinas por año. A fines de 1964 había 5.641 trabajadores de nacionalidad británica y 9.600 trabajadores extranjeros; la mayoría de estos últimos vivía en España y entraba diariamente a Gibraltar. Aproximadamente el 43% del total de la fuerza de trabajo está empleada por el Gobierno de Gibraltar, el Departamento de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Edificios y Obras Públicas y el Consejo de la Ciudad. Las otras principales fuentes de empleo son la industria de la construcción, el comercio distributivo al por mayor y al por menor, la industria hotelera y el abasto, los servicios marítimos y el servicio doméstico privado.

14. En 1964 existían 12 asociaciones de empleados con un total de 364 miembros. Había 16 sindicatos con 3.734 miembros en conjunto. Esta cifra representa aproximadamente el 60% de la población empleada residente.

Sanidad

15. El Consejo de Administración de los Servicios Médicos y Sanitarios está encargado de administrar todos los servicios médicos y sanitarios oficiales. Está formado por tres miembros *ex officio* y seis miembros nombrados por el Gobernador, bajo la presidencia del Ministro de Servicios Médicos.

16. El Gobierno administra cuatro hospitales. Otros servicios médicos y sanitarios administrados por el Gobierno son los servicios de tratamiento médico a pacientes externos, los servicios de bienestar infantil, los servicios de sanidad escolar y los servicios sanitarios del puerto y del aeropuerto.

17. En 1964 los gastos recurrentes del Gobierno en materia de sanidad ascendieron a 267.266 libras esterlinas y los del Consejo de la Ciudad a 34.330 libras.

Situación de la enseñanza

18. El Ministerio de Educación es el responsable de fijar la política que guiará el progreso general de la educación en el Territorio. Está asesorado por el Funcionario Jefe de Educación, que tiene control ejecutivo general sobre el departamento, en virtud de la *Gibraltar Education Ordinance* de 1953.

19. La educación es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y es gratuita en las escuelas oficiales.

20. En 1964 se impartía enseñanza primaria en 12 escuelas oficiales y tres escuelas privadas. Salvo un pequeño número de alumnos en dos escuelas privadas, la enseñanza secundaria era proporcionada exclusivamente por el Gobierno. Había dos escuelas privadas secundarias, una escuela técnica para varones, una escuela comercial para niñas y cuatro escuelas secundarias. Las dos escuelas secundarias privadas preparaban a los alumnos para el *General Certificate of Education*, en el nivel ordinario y adelantado.

21. A fines de 1964 la matrícula escolar era de 3.014 (1.553 alumnos y 1.461 alumnas) en la ense-

ñanza primaria; de 1.621 (787 alumnos y 834 alumnas) en la enseñanza secundaria, y de 153 (105 alumnos y 48 alumnas) en la enseñanza técnica y profesional.

22. En 1964 los gastos recurrentes del Gobierno en materia de educación ascendieron a 198.822 libras esterlinas.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

23. El Comité se ocupó de Gibraltar en sus sesiones 475a. y 480a., celebradas en la Sede el 11 y el 17 de noviembre de 1966.

24. El Comité Especial tuvo a la vista las siguientes peticiones referentes a Gibraltar:

Peticionario	Documento
Sr. Edward O. Recagno	A/AC.109/PET.531
Sres. Mohammed Bey, Lahoussine Bey y Youssel	A/AC.109/PET.532

25. En una carta de fecha 8 de septiembre de 1966 (A/AC.109/210), el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas solicitó que se permitiera a su delegación participar en las deliberaciones del Comité Especial sobre Gibraltar. El Comité decidió, sin objeción, acceder a esa solicitud.

26. El representante de España dijo que el 17 de enero de 1966, tras de recibir el texto de la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General, el Gobierno español había propuesto nuevamente al Gobierno del Reino Unido la iniciación de negociaciones sobre Gibraltar, a lo que dicho Gobierno había accedido el 14 de febrero; el 18 de mayo se habían reunido en Londres el Ministro de Asuntos Exteriores de España y el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministro español había hecho, acerca de la descolonización de Gibraltar, una oferta a la que aún no había contestado el Gobierno del Reino Unido, y que el Comité Especial conocía. Para estudiarla debidamente se había decidido que las negociaciones continuaran a alto nivel, y se habían celebrado reuniones en junio, julio, septiembre y octubre; además, se preveía una próxima reunión.

27. Se había decidido mantener las negociaciones reservadas, sin perjuicio de la obligación de informar al Comité y a la Asamblea General, pero el Gobierno del Reino Unido había roto este compromiso y había anunciado la publicación de un Libro Blanco en el cual, al parecer, se reproducirían los documentos intercambiados en las reuniones. España se reservaba, a la vista de lo que se declarase en dicho Libro Blanco, el informar al respecto al Comité y a las Naciones Unidas.

28. Se había producido un nuevo hecho que podía traer graves consecuencias. El 12 de julio el Gobierno del Reino Unido había manifestado formalmente al Gobierno español, por primera vez en la historia, que era soberano sobre el trozo de territorio español contiguo a Gibraltar donde estaba el aeródromo, trozo declarado en el pasado como zona neutral y desmilitarizada por España. La soberanía española sobre ese territorio nunca había sido negada por el Reino Unido hasta este año y hasta ya iniciadas las negociaciones en virtud de la resolución 2070 (XX). Este era un gravísimo acto de agresión británica contra España, cuyo Gobierno había solicitado del Reino Unido que reconsiderase su pretensión sobre un trozo de territorio no cedido en el Tratado de Utrecht. El Gobierno del Reino Unido se había reafirmado en su pretensión de soberanía, había negado el carácter neutral del citado territorio, lo usa-

ba con fines militares y hacía revolar los aviones de su fuerza aérea sobre el espacio aéreo español contiguo a Gibraltar.

29. Aun así, España continuaba negociando y había insistido en que el Reino Unido reconsiderara su declaración de soberanía sobre ese territorio y se abstuviera de utilizarlo militarmente, para no verse obligada a tomar nuevas medidas ante la agresión.

30. España estudiaba la última propuesta británica a la luz de las resoluciones 1514 (XV) y 2070 (XX) y esperaba contestar a ella en breve plazo.

31. El representante del Reino Unido declaró que, en cumplimiento de la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General, su Gobierno había estado celebrando conversaciones con el de España a fin de solucionar satisfactoriamente los problemas. Esas conversaciones habían sacado a luz varios problemas jurídicos.

32. Gibraltar pertenecía por derecho al Reino Unido, pero éste se consideraba en el deber de solucionar pacíficamente las controversias y por eso proponía al Gobierno español llevar los aspectos jurídicos de la cuestión de Gibraltar ante la Corte Internacional de Justicia. Pero también el Reino Unido estaba obligado por la Carta a salvaguardar los intereses del pueblo de Gibraltar, como había reconocido el Comité Especial en su consenso de 16 de octubre de 1964. Si se respetaban los intereses del pueblo de Gibraltar podría encontrarse una solución, y como gran parte del desacuerdo radicaba en cuestiones jurídicas, cabía remitir la cuestión a la Corte Internacional de Justicia.

33. En su exposición, el representante de España había omitido referirse a las restricciones impuestas por su país en varias etapas, en la frontera con Gibraltar, durante los últimos meses. El Reino Unido quería solucionar conciliadora y amistosamente la cuestión, pero no contribuían a mejorar el ambiente estas medidas de España, que en octubre pasado había anunciado todavía nuevas restricciones a la libertad de circulación entre su territorio y Gibraltar, cuando se había acordado no aumentarlas. Esto parecía destinado a ejercer presiones que harían más difíciles las negociaciones, y era un factor que debería tenerse en cuenta.

34. El representante de España había dicho que la afirmación británica de soberanía sobre la parte sur del istmo en que estaba el aeródromo era un nuevo hecho que podía tener graves consecuencias. Desde hacía más de dos siglos y medio el Reino Unido utilizaba la parte sur del istmo; y en 1838 había establecido para marcar su jurisdicción un cordón de centinelas que en 1909 había sido reemplazado por una verja a fin de evitar el contrabando. Hacía sesenta años el Reino Unido había dicho claramente que no tenía dudas acerca de su soberanía sobre la parte sur del istmo, y hacía treinta años que había construido, al sur de la mencionada línea, un aeródromo que fue utilizado militarmente durante la segunda guerra mundial sin que España, pese a su neutralidad, protestase. Mal podía sostener ahora que ello suponía agresión. No había habido cambios en la zona durante largo tiempo y nada justificaba las recientes restricciones y medidas fronterizas de España.

35. Era cierto que los aviones del Reino Unido utilizaban el aeródromo con fines militares y el Gobierno español había hecho denuncias de violación de su espacio aéreo, pero las investigaciones realizadas habían revelado un solo caso de vuelo sobre el territorio español,

por el cual el Gobierno del Reino Unido había expresado su pesar.

36. El Reino Unido no había dejado de contestar las propuestas de España. Había hecho amplias contrapropuestas que aguardaban contestación, y consideraba que las negociaciones deberían continuar. Esperaba que España opinase lo mismo, ya que con buena fe era posible encontrar una solución pacífica que contemplara los intereses del pueblo de Gibraltar. El Reino Unido había decidido publicar los documentos de las negociaciones porque se habían deslizado ya muchas informaciones a la prensa y España no era ajena a este hecho; además, se había advertido de antemano al Gobierno de España que se había tomado esa decisión.

37. El representante de España contestó que en una nota verbal de 29 de septiembre de 1966 el Ministerio de Asuntos Exteriores de España había comunicado a la Embajada del Reino Unido en Madrid que el 12 de julio de 1966 el Gobierno del Reino Unido había señalado al Gobierno español, por primera vez en la historia y sin aportar razones válidas en que apoyar su pretensión, que además de ser soberano sobre el Peñón, lo era también sobre el trozo de istmo situado entre las antiguas murallas de Gibraltar y la verja erigida en 1909 por las autoridades británicas. Este territorio estaba ocupado indebidamente por Gran Bretaña desde el siglo XIX y había sido separado físicamente del resto del territorio español por la mencionada verja. La ocupación británica del citado territorio había tenido su origen en facilidades otorgadas por el Gobierno español circunstancialmente y por razones de humanidad con motivo de epidemias que habían obligado a instalar en el istmo campamentos sanitarios que más tarde Gran Bretaña había convertido en permanentes, y se había negado a evacuar. Este trozo de istmo había sido neutralizado en el siglo XVIII por el Gobierno español, accediendo a los deseos británicos. El Gobierno del Reino Unido había estado recibiendo desde el siglo pasado las reiteradas protestas del Gobierno español, tanto por la indebida presencia británica en ese trozo del istmo como por la edificación de la verja. El Reino Unido nunca había discutido las reiteradas declaraciones de soberanía española sobre dicho territorio. El Gobierno español había considerado la reciente declaración unilateral de soberanía del Reino Unido como una agresión contra la integridad territorial de España, cuyo Gobierno había reclamado del Gobierno del Reino Unido que siguiera reconociendo allí la soberanía española. El Gobierno español había recordado al Gobierno del Reino Unido que las aguas y el espacio aéreo adscritos a este trozo de istmo eran también de soberanía española y que el carácter neutral de esta zona había de ser respetado por ambos países. El Gobierno del Reino Unido se había ratificado en la afirmación de su pretendida soberanía sobre ese trozo de territorio y había señalado que podía utilizar el espacio aéreo de dicho istmo para fines defensivos. El Gobierno español había vuelto a recordar al Gobierno del Reino Unido los derechos españoles sobre el trozo de istmo y había protestado por una serie de violaciones cometidas por aviones militares británicos en el espacio aéreo español, próximo a Gibraltar, adjuntando documentación en la que describió las violaciones. El Gobierno del Reino Unido había insistido de nuevo en que era soberano sobre el trozo de territorio español contiguo a Gibraltar y había derogado, sin más explicaciones, el carácter neutral del mismo, pretendiendo convertir

una ocupación sin título jurídico en una usurpación definitiva respaldada únicamente por la fuerza. Aún más: afirmaba que los capitanes de las aeronaves militares británicas tenían instrucciones de utilizar "circuitos de aproximación bien establecidos que no suponen una infracción de los derechos españoles". Añadió que en espera de que el Gobierno del Reino Unido precisara a qué "circuitos de aproximación" se refería, el Gobierno español declaró que todo avión militar británico que volara sobre territorio o aguas españolas cometería una violación del espacio aéreo de España. A pesar de la protesta española, aviones militares británicos habían vuelto a infringir el espacio aéreo español. Esta política de fuerza y de hechos consumados del Gobierno del Reino Unido exigía del Gobierno español la aplicación de medidas en defensa de su soberanía, suponía un nuevo obstáculo en las relaciones entre los dos países y confirmaba al Gobierno español en su creencia de que el buen éxito de las negociaciones que se estaban celebrando para la descolonización de Gibraltar constituía la única solución adecuada.

38. El representante español dio lectura a otra nota verbal, enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a la Embajada del Reino Unido en Madrid con fecha 21 de octubre de 1966, en la que el Gobierno español lamentaba no poder considerar como contestación definitiva del Gobierno del Reino Unido una nota de su embajada que se limitaba a presentar excusas por una violación del espacio aéreo español, a poner en duda que se hubieran cometido otras dos violaciones y a afirmar que no habían tenido lugar las otras nueve violaciones del total de doce que el Gobierno español había señalado. Las autoridades competentes españolas insistían en que habían ocurrido esas doce violaciones, comprobadas por métodos de observación técnicos que no dejaban lugar a dudas. Más aún, el Gobierno español protestaba enérgicamente por la declaración de soberanía, hecha por el Gobierno del Reino Unido, sobre el trozo de territorio español situado entre la verja de 1909 y las murallas de Gibraltar, así como por la utilización militar de dicho territorio, y por las violaciones del espacio aéreo español. En relación con ese último punto, a la nota verbal española se adjuntaron descripciones gráficas de otras quince violaciones. En una declaración hecha ante la Asamblea General en su decimoctavo período de sesiones⁸, el Ministro español de Asuntos Exteriores había afirmado que ante el problema de Gibraltar España sólo se había cerrado un camino: el de la violencia. Sin embargo, al Gobierno español le preocupaba el que el Gobierno de Su Majestad Británica pudiera interpretar aquella solemne declaración española como un cheque en blanco para la reiteración de sus violaciones y de sus actos atentatorios contra la soberanía española, respaldados en la fuerza. El Gobierno español, que estaba evitando el adoptar medidas más rigurosas, solicitaba del Gobierno del Reino Unido que reconsiderase su declaración de soberanía sobre el istmo y que dejase de utilizar con fines militares el aeródromo de Gibraltar.

39. El representante del Reino Unido indicó que en relación con los supuestos vuelos sobre el territorio español por aeronaves militares británicas, el Gobierno del Reino Unido había respondido el 15 de octubre de 1966 que las investigaciones hechas por las autorida-

des británicas habían determinado un solo caso en el cual, por inadvertencia, un avión militar británico había volado sobre el territorio de La Línea; el Gobierno del Reino Unido deploraba el incidente y declaraba que había tomado medidas para disminuir la posibilidad de que se repitiera el hecho. Se trataba concretamente de emplear un nuevo dispositivo de radar para poder introducir un nuevo procedimiento de circuitos. Las restantes acusaciones carecían de fundamento o eran dudosas. Añadió que el Gobierno del Reino Unido había recibido ulteriormente otra nota del Gobierno español y estaba investigando los hechos con igual atención.

40. En definitiva, era evidente, dijo, que la cuestión de la soberanía del istmo constituía un excelente ejemplo de los casos que podría tratar la Corte Internacional de Justicia. Por lo demás, el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a seguir negociando pacíficamente con las autoridades españolas.

41. Se refirió a continuación a un discurso pronunciado la víspera en la Cámara de los Comunes por el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido y en el que se subrayaba que el problema real radicaba en que la cuestión afectaba a seres humanos cuyos intereses deberían estar por encima de todo, tal como se establecía en la Carta de las Naciones Unidas. En Gibraltar había veinte mil personas cuya opinión era factor muy importante. Aunque España considerase que los deseos de los habitantes de Gibraltar no tenían nada que ver con la solución internacional del problema, el Reino Unido los consideraba importantísimos. De las conversaciones entre los dos Gobiernos se desprendería claramente que existían problemas jurídicos que deberían aclararse si se quería realizar algún progreso. Esos aspectos jurídicos debían someterse a la Corte Internacional de Justicia.

42. El representante de Siria consideraba conveniente que siguieran las negociaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido e hizo un llamamiento al representante del Reino Unido para pedirle que su Gobierno no opusiera a las negociaciones obstáculos como la publicación del Libro Blanco, los vuelos sobre el territorio español y la afirmación de soberanía sobre el istmo. El que se hubiera ocupado una zona por un tiempo o que se hubiesen levantado construcciones en ella no podía servir de base para reclamar posesión de un territorio. El Reino Unido había mencionado el uso del aeródromo durante la segunda guerra mundial como si ese precedente justificara su uso con fines militares en la actualidad, cuando el Reino Unido no estaba en guerra con nadie; si el Gobierno español, entonces neutral, no había protestado contra ello, no era lógico que en este momento se respondiera así a esa hospitalidad.

43. El representante de Uruguay dijo que discrepaba con la posición del Gobierno del Reino Unido. El peñón de Gibraltar era tierra española que debería volver a España, y el Reino Unido no estaba dando pruebas de buena voluntad al respecto.

44. Cuando en 1713 se firmara el Tratado de Utrecht, España había cedido al Reino Unido el peñón, pero no el istmo. La soberanía del Reino Unido sobre el istmo no existía porque no la había adquirido de manera lícita según las normas del derecho internacional. El Gobierno español, por las razones humanitarias que había expuesto el representante de España.

⁸ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo período de sesiones, Sesiones Plenarias, sesión 1213a.

había permitido al Reino Unido que utilizara ese territorio. España estaba pidiendo la devolución del territorio, y al negarse a devolverlo, el Gobierno del Reino Unido cometía lo que jurídicamente podría calificarse de usurpación. Por eso ocurrían los incidentes denunciados por España y que, por lo demás, incumbían más al Consejo de Seguridad que al Comité Especial o a la Cuarta Comisión.

45. El Reino Unido y España deberían dejar de discutir en las Naciones Unidas y celebrar negociaciones en Londres y en Madrid. El día en que ambos países declararan que ya no existían territorios coloniales en Europa, el mundo entero rendiría homenaje al pabellón británico arriado en Gibraltar.

46. El representante de Túnez se felicitó de que ambas partes hubiesen aceptado los términos de la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General y se manifestaran dispuestas a proseguir las negociaciones. En el caso de Gibraltar se trataba de conseguir la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Había llegado el momento de que el Reino Unido reconociera la legitimidad de las demandas de España, que pedía la devolución de un territorio que le pertenecía. Por su parte, la delegación de Túnez ayudaría en todo cuanto estuviese en su poder a las partes para que alcanzaran un acuerdo cuyo resultado sólo podría ser el reconocimiento de los derechos de España sobre Gibraltar.

47. El representante de Túnez se unió al representante de Siria para pedir al Reino Unido que no hiciera nada que pudiera entorpecer las negociaciones y tomara medidas para evitar que se reprodujesen los incidentes ocasionados por la presencia de una base militar británica en territorio español.

48. El representante de la República Unida de Tanzania señaló que el problema de Gibraltar era un problema de descolonización. En la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General se invitaba a los Gobiernos de España y del Reino Unido a iniciar sin demora las conversaciones previstas según los términos del consenso aprobado en octubre de 1964 por el Comité Especial. Pero también se pedía a ambos Gobiernos que informaran sobre el resultado de sus negociaciones al Comité Especial y a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones. En la actualidad España y el Reino Unido hablaban de las dificultades con que tropezaban y no comunicaban ningún resultado concreto. Era, pues, necesario estudiar la manera de hacer avanzar esas negociaciones. Tal vez fuera posible que otros Estados no interesados directamente en el problema intervinieran en las conversaciones para acelerarlas, porque parecía muy difícil que el Reino Unido y España llegasen a un acuerdo por sí solos. Con estos retrasos se había perjudicado el proceso de descolonización.

49. Añadió que si las partes en esta controversia deseaban recurrir a la Corte Internacional de Justicia, era asunto suyo, pero Tanzania no apoyaría ninguna resolución cuyo objeto fuese someter un problema colonial a la Corte.

50. El representante del Irán recordó que en su resolución 2070 (XX) la Asamblea General tenía en cuenta la relación histórica de Gibraltar con España, y en lugar de limitarse a mencionar los deseos de la población, aprobaba un procedimiento especial que era el adecuado en los casos en que el acto original de anexión

colonial había acarreado la separación de una parte del territorio de la madre patria, esto es, recomendar que se celebraran negociaciones entre las partes interesadas. La delegación del Irán consideraba curioso que, en el caso concreto de Gibraltar, la delegación del Reino Unido demostrase una preocupación tan poco corriente por los deseos de los habitantes. Aunque lo correcto fuese recurrir a las negociaciones, la Asamblea General seguía obligada a mantenerse al tanto de la situación y, si las negociaciones se retrasaban demasiado, debía estar dispuesta a adoptar medidas para garantizar la rápida aplicación de la resolución 1514 (XV).

51. El representante de Australia declaró que, a juicio de su delegación, el Comité debía tener en cuenta no sólo el conflicto entre las reivindicaciones de soberanía de dos Estados sobre el Territorio, sino también el destino de los 24.000 gibraltareños.

52. El representante de Venezuela dijo que su delegación consideraba que la cuestión de Gibraltar era un problema colonial y que se le podía aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; sin embargo, no debería utilizarse la descolonización como pretexto para actos que quebrantasen la integridad territorial de ningún país. Habían ocurrido incidentes lamentables, como la violación del espacio aéreo español, y el Reino Unido seguía obstruyendo las negociaciones. El Comité debería insistir en que era necesario que continuaran las negociaciones y que se llevara a cabo la descolonización con la mayor rapidez posible. Añadió que deseaba que cualquier resolución que se aprobase tuviera en cuenta dichos puntos.

53. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que el Reino Unido se había apoderado de Gibraltar y lo había convertido en base militar para afianzar su política en el Oriente Medio y el Lejano Oriente y en otras zonas. Además últimamente Gibraltar se había convertido no en una mera base del Reino Unido, sino en una cabeza de puente para la política agresiva del bloque militar de la OTAN y sus fuerzas nucleares unidas. El Gobierno de España no había dejado de condonar esa evolución. Un despacho de julio de 1966 de la agencia Reuters decía que en las negociaciones celebradas sobre el Territorio entre el Reino Unido y España se había debatido la posibilidad de convertir a Gibraltar en una base militar conjunta para la OTAN. Las reivindicaciones y contra-reivindicaciones de soberanía sobre la faja neutral y la utilización de la base aérea de Gibraltar para fines militares constituían indicios de que se había llegado a un acuerdo entre Potencias colonialistas y que dicho acuerdo representaba una amenaza a la paz y seguridad de toda la zona. El hecho de que el Reino Unido utilizara a Gibraltar para concentrar armamentos no constituía una amenaza sólo para el pueblo de Gibraltar, sino para los demás pueblos de la región.

54. Era motivo de preocupación el que, en las declaraciones relativas a la marcha de las negociaciones entre España y el Reino Unido, casi no hubiese indicación de que se hubiera hablado de liquidar la base militar de Gibraltar. España hablaba de descolonización y el Reino Unido de los derechos de los gibraltareños a la libre determinación, pero era evidente que las negociaciones entre ambas Potencias eran contrarias a los intereses de los habitantes. Era obvio que ninguna de las partes presentaba propuestas constructivas para una solución pacífica. La delegación de la URSS era par-

tidaria de que se desmilitarizara la zona y se liquidara la base, única solución conforme con los intereses del pueblo español y los demás pueblos de la zona. Ello facilitaría también la terminación del estatuto colonial de Gibraltar en condiciones equitativas y constructivas.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

55. En la 480a. sesión el representante de Túnez presentó un proyecto de resolución conjunto sobre la cuestión de Gibraltar (A/AC.109/L.356) en nombre de Chile, Irak, Irán, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Uruguay y Venezuela.

56. El representante de la República Unida de Tanzania declaró que su delegación había copatrocinado el proyecto de resolución con un espíritu de cooperación y transacción, pero que abrigaba ciertas reservas. En primer lugar, España y el Reino Unido no habían dado suficientes detalles sobre sus negociaciones acerca del porvenir del Territorio. La delegación de Tanzania deseaba insistir en que la próxima vez que el Comité se ocupara en la cuestión, se dispusiera de detalles completos sobre la marcha de dichas negociaciones, pues quería establecer si podían conciliarse las posiciones de ambas partes. El orador apoyaba incondicionalmente el párrafo 3 de la parte dispositiva, en el que se pedía a España y al Reino Unido que informaran al Comité Especial lo antes posible. El Comité debería disponer de suficiente tiempo para debatir la cuestión a fondo, y no con prisas, como se estaba haciendo.

57. La delegación de Tanzania hubiera preferido también que la mención de ciertos actos en el último considerando del proyecto de resolución fuera más concreta. Sin embargo, cabía esperar que España y el Reino Unido comprendieran cuáles eran los actos a que se aludía, se abstuvieran de ellos y comenzaran negociaciones en serio.

58. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que, como en el proyecto de resolución no se aludía a la desnuclearización de Gibraltar ni a la desmilitarización de esa zona, su delegación no podría votar a favor.

59. El representante de Bulgaria dijo que, aunque su delegación compartía el deseo de otras de que se llegase a un acuerdo sobre el proyecto de resolución, tenía ciertas reservas sobre el fondo del problema. Resultaba sorprendente que ni el representante de España ni el del Reino Unido hubieran mencionado la esencia del problema, que era la existencia de una base militar en Gibraltar. No se podían considerar la base y su porvenir separadamente del deseo de libre determinación del pueblo de Gibraltar. Por dicho motivo, y en deferencia al derecho de libre determinación del pueblo de Gibraltar, la delegación de Bulgaria se abstendría en la votación sobre el proyecto de resolución y volvería a hablar sobre el asunto en la Cuarta Comisión.

60. A continuación el Comité Especial aprobó el proyecto de resolución conjunto (A/AC.109/L.356) por 16 votos contra ninguno y 6 abstenciones.

61. El representante de Australia, hablando para explicar su voto, declaró que su delegación hubiera preferido la aprobación por consenso dado que, aunque apreciaba los esfuerzos hechos por los patrocinadores del proyecto de resolución, consideraba que con un con-

senso varias delegaciones hubieran podido reservar su posición en la fase actual y exponer su opinión en la Cuarta Comisión, donde no cabía duda de que volvería a discutirse el problema. Dado que no había sido así, la delegación de Australia se abstendría en la votación, sin que ello prejuzgase la posición que pudiera adoptar en lo futuro.

62. El representante de Polonia, al explicar su voto, dijo que como el proyecto de resolución no abarcaba todos los aspectos vitales del problema, su delegación había tenido que abstenerse, pero ello no prejuzgaba la posición que pudiera adoptar sobre la cuestión en la Cuarta Comisión.

63. El representante del Reino Unido indicó que su delegación se había abstenido porque no le parecían aceptables todos los puntos de la resolución y porque no había tenido tiempo de recibir las instrucciones de su Gobierno.

64. Con respecto a las observaciones del representante de la Unión Soviética señaló que Gibraltar no era una base de la OTAN.

65. El representante de los Estados Unidos de América declaró que si su delegación se había abstenido no se debía al fondo del proyecto de resolución, sino a que no había tenido tiempo de consultar con su Gobierno.

66. A continuación se reproduce el texto de la resolución (A/AC.109/216) aprobada por el Comité Especial en su 480a. sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1966:

"El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,

"Habiendo examinado la cuestión de Gibraltar,

"Habiendo oído las declaraciones de la Potencia Administradora y del representante de España.

"Recordando la resolución 2070 (XX) de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1965, y el consenso adoptado por el Comité Especial el 16 de octubre de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. X, párr. 209),

"Recordando asimismo la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960,

"Teniendo en cuenta la manifiesta disposición de la Potencia Administradora y del Gobierno español para continuar las actuales negociaciones,

"Lamentando que hayan ocurrido ciertos actos que han perjudicado la buena marcha de esas negociaciones,

"1. Invita a las dos partes a que se abstengan de actos que obstruyan el éxito de esas negociaciones;

"2. Lamenta la demora en el proceso de descolonización y en la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a ese Territorio;

"3. Invita a las dos partes a que continúen sus negociaciones con espíritu constructivo e informen al Comité Especial lo antes posible y, en todo caso, antes del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General;

"4. Pide al Secretario General que preste su asistencia para la aplicación de la presente resolución."

CAPÍTULO XII*

SOMALIA FRANCESA

A. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Generalidades

1. La Somalia Francesa (*Côte française des Somalis*), en la costa occidental de África, se encuentra al borde del golfo de Tadjoura, en el fondo del golfo de Adén, exactamente al Sur del estrecho de Bab-el-Mandeb. Tiene una superficie de unas 8.900 millas cuadradas (23.000 km.²), en su mayor parte desértica. El Territorio tiene fronteras comunes con Etiopía al Norte, al Oeste y al Sudoeste y con la República de Somalia al Sudeste. La línea de la costa mide unos 800 km. de largo desde Ras Doumeira en el Norte a Loyada en el Sur.

2. La población total del Territorio se calculaba en 81.000 habitantes en 1961, en comparación con 64.000 en 1955 y 53.000 en 1950.

3. En 1961 la población incluía tres grupos principales: los danakiles o afares, cuyo número era de 30.000, los somalíes que eran 24.000, y los árabes, 6.000. Había una población francesa de unos 3.000 habitantes y también una población de origen extranjero. Los habitantes provenientes de Adén, India, Madagascar, Grecia e Italia sumaban unas 5.000 personas, aproximadamente. La población flotante constituía el resto.

4. Djibouti, la capital, tenía una población de unos 41.000 habitantes. Se componía de árabes, danakiles y somalíes de diferentes grupos, franceses y extranjeros. Algunos otros centros de población tenían en total unos 4.300 habitantes. El resto de la población era nómada. Comprendía a los danakiles que habitaban el Norte y el Oeste del Territorio y a los somalíes issa que habitan el Sur.

*Gobierno**Situación jurídica*

5. El primer tratado entre Francia y los jefes danakiles se firmó en París el 4 de marzo de 1862. Por este tratado los sultanes de Tadjoura, Raheita y Gobaad cedieron a Francia el territorio de Obock. Varias compañías francesas se establecieron en los años siguientes. El 24 de junio de 1884 fue nombrado el primer Administrador colonial francés del territorio de Obock.

6. El 21 de septiembre de 1884, el Sultán de Tadjoura concluyó un tratado con Francia para la cesión del territorio de Tadjoura. El Sultán de Gobaad también hizo cesiones de territorio sobre el Golfo de Tadjoura el 14 de diciembre de 1884 y el 2 de enero de 1885.

7. El 26 de marzo de 1885 se estableció un Protectorado francés en la región de Djibouti, en virtud de un tratado concluido entre Francia y los jefes issa de la región.

8. Djibouti se convirtió en la capital y la sede del gobierno en 1892. Por decreto del Gobierno francés de fecha 20 de mayo de 1896, el Territorio fue nombrado oficialmente "*Côte française des Somalis et dépen-*

dances". Era administrado por un Gobernador con asistencia de un Consejo de Administración.

Evolución política y constitucional a partir de la segunda guerra mundial

9. En 1945 se estableció un Consejo representativo. El Consejo estaba compuesto por doce miembros elegidos y ocho miembros nombrados. Seis miembros eran elegidos por los ciudadanos franceses y otros seis por los colegios electorales de árabes, danakiles y somalíes, correspondiendo a cada uno de ellos elegir a dos consejeros.

10. La Constitución francesa de 1946 contenía disposiciones por las que se establecía que los Territorios de Ultramar de la República tendrían asambleas territoriales electivas y enviarían representantes al Parlamento francés y a la Asamblea de la Unión Francesa¹. La Somalia Francesa fue incluida entre los Territorios de Ultramar enumerados en la ley del 27 de octubre de 1946, que disponía la constitución y elección de la Asamblea de la Unión Francesa.

11. En 1950 se estableció en Somalia Francesa un Consejo representativo elegido. Estaba compuesto por 25 miembros, de los cuales doce eran elegidos por ciudadanos con estado civil francés y trece por ciudadanos que habían conservado su estado civil personal².

12. La Ley Básica (*Loi-cadre*) del 23 de junio de 1956, aprobada por la Legislatura francesa previa consulta con la Asamblea de la Unión Francesa, disponía la introducción de reformas en los Territorios de Ultramar, incluso la concesión de poderes deliberativos más amplios a las asambleas territoriales y el establecimiento de Consejos de Gobierno. La Ley Básica también establecía el sistema electoral basado sobre el sufragio universal de los adultos, sin tener en cuenta su situación jurídica personal, y sobre la base de un colegio electoral único.

13. Por ley del 17 de abril de 1957 se reorganizó la Asamblea Territorial de la Somalia Francesa sobre la base del sufragio universal y el 23 de junio de 1957 se celebraron elecciones para constituir la nueva Asamblea. Por decreto del 22 de julio de 1957 se aplicaron las disposiciones de la Ley Básica relativas al establecimiento de un Consejo de Gobierno y a la ampliación de las facultades de la Asamblea Territorial. El señor Mahmoud Harbi fue elegido por la Asamblea como primer Vicepresidente del Consejo de Gobierno.

14. El 28 de septiembre de 1958 la nueva Constitución francesa fue objeto de un referéndum, en el que participaron los electorados tanto de la Francia metropolitana como de los Territorios de Ultramar. El texto constitucional disponía la institución de la Comunidad Francesa. Los Territorios de Ultramar que rechazaran

¹ Por ley del 7 de mayo de 1946 se extendió la ciudadanía francesa, reconocida por la Constitución, a los habitantes de los Territorios de Ultramar.

² El "estado civil personal" se aplicaba sólo a los habitantes autóctonos del Territorio que no habían renunciado a dicho estado, según las disposiciones del artículo 82 de la Constitución francesa de 1946.

la Constitución lograrían automáticamente la independencia.

15. La Constitución dispone que los Territorios de Ultramar son departamentos territoriales de la República Francesa y parte integrante de ella. La Constitución dispone asimismo que los Territorios de Ultramar pueden conservar su situación jurídica o pueden decidir convertirse en departamentos de la República o en Estados Miembros de la Comunidad Francesa. La asamblea territorial interesada debía decidir la cuestión dentro de los cuatro meses siguientes a la promulgación de la Constitución.

16. El Sr. Harbi aconsejó al electorado de Somalia Francesa que rechazara la Constitución. No obstante, los resultados del referéndum fueron 8.662 votos a favor (el 75,2% del total de los votos) y 2.851 votos en contra. El 6 de octubre de 1958 las autoridades francesas suspendieron al Sr. Harbi en sus funciones. El 9 de octubre fueron suspendidos otros dos Ministros, por haber tomado parte en demostraciones prohibidas. La Asamblea Territorial fue disuelta y el Sr. Harbi y sus partidarios sufrieron una derrota en las nuevas elecciones celebradas el 23 de noviembre. La Asamblea nuevamente elegida determinó el 11 de diciembre, por 27 votos a favor contra 4, que la Somalia Francesa continuara como Territorio de Ultramar.

17. Al principio, Francia transmitió al Secretario General información sobre Somalia Francesa en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta en 1946, pero dejó de hacerlo desde 1957 por las razones expuestas en una carta de fecha 23 de marzo de 1959 transmitida al Secretario General por el Representante Permanente de Francia (véase anexo I).

Estructura política actual

18. La estructura política actual del Territorio fue establecida por decretos emitidos en cumplimiento de la Ley Básica, en particular, el decreto de 3 de diciembre de 1956 (tal como fue modificado por el decreto del 4 de abril de 1957) y el decreto de 22 de julio de 1957. Sus características principales se describen a continuación.

a) Gobernador

i) El Gobernador es el jefe del territorio y el representante de la República Francesa. Es nombrado por el Gobierno de Francia y es directamente responsable de la administración de los "servicios del Estado" (*services d'Etat*).

ii) La lista de los servicios del Estado puede resumirse como sigue: 1) los servicios que aseguran la representación del poder central; 2) los servicios de relaciones exteriores; 3) los servicios de seguridad general, militar y económica; 4) las instituciones y los servicios que garantizan el respeto de las libertades públicas tales como los tribunales judiciales de derecho francés, la política judicial, la inspección del trabajo; 5) los servicios que aseguran o dirigen las comunicaciones exteriores; y 6) los servicios e instituciones que aseguran la solidaridad de los elementos que constituyen la República, el adelanto económico, social y cultural de ésta y su régimen monetario y financiero (incluso los servicios del Tesoro, dirección financiera, servicios de planificación, enseñanza superior, emisoras de radiodifusión).

b) El Consejo de Gobierno

i) El Consejo de Gobierno está compuesto de seis a ocho miembros con título de Ministros, elegidos por la Asamblea Territorial entre sus miembros o de fuera de su seno. El Ministro de más jerarquía tendrá el título de Vicepresidente del Consejo de Gobierno. No obstante, el propio Consejo normalmente es presidido por el Gobernador. Los Ministros son nombrados para cumplir sus funciones y podrán ser relevados a propuesta del Vicepresidente del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno puede dimitir si cree que ya no cuenta con la confianza de la Asamblea Territorial, pero no podrá ser disuelto salvo por decreto del Gobierno francés, previa consulta con la Asamblea Territorial. Normalmente permanece en funciones hasta que se elige una nueva Asamblea Territorial.

ii) El Consejo de Gobierno, bajo la alta autoridad del Gobernador, es responsable de la administración de los intereses territoriales. Prepara todos los asuntos que deben ser presentados a la Asamblea Territorial y pone en práctica todas las órdenes que sean emitidas por el Gobernador sobre asuntos territoriales, incluso la organización de los servicios públicos territoriales. No obstante, si el Gobernador considera que una decisión del Consejo de Gobierno está fuera de sus facultades o puede perjudicar la defensa nacional, el orden público o el mantenimiento de la seguridad o de las libertades públicas, remitirá dicha decisión al Gobierno francés, que podrá anularla por decreto. Se puede también apelar de una decisión ante el Consejo de Estado francés, que actuará como tribunal contencioso administrativo.

iii) Cada Ministro es responsable ante el Consejo de Gobierno del funcionamiento de los servicios públicos territoriales a su cargo.

c) Asamblea Territorial

i) La Asamblea Territorial consta de treinta y dos miembros elegidos en siete distritos electorales con pluralidad de miembros. En cada distrito se vota, sobre la base del sufragio universal de los adultos, a favor de una lista de candidatos y no existe la representación proporcional; tampoco se realiza una segunda votación si ninguna de las listas logra una mayoría absoluta en la primera elección.

ii) La Asamblea Territorial celebra dos períodos ordinarios de sesiones anualmente, el segundo de los cuales se dedica al presupuesto. En virtud del decreto de 22 de julio de 1957, la Asamblea está facultada para tomar decisiones, en forma de reglamentos territoriales, sobre una larga lista de asuntos que incluyen: la organización general de los servicios territoriales; el derecho consuetudinario; las tierras de dominio público; el comercio interno; la agricultura, los bosques, la ganadería y la pesca; las modalidades de aplicación del régimen de los recursos minerales; las cajas de ahorro; la salud pública; el control de las bebidas alcohólicas; el turismo; la urbanización y la vivienda; la educación (salvo la enseñanza superior), con excepción de los planes de estudio y los exámenes; las becas; los deportes; los servicios de bienestar y asistencia; y el régimen penitenciario. Las decisiones sobre estos asuntos se pueden tomar a pesar de disposiciones contrarias de leyes del Parlamento francés o de decretos, excepción hecha de unas pocas leyes determinadas y con sujeción a las disposiciones de las convenciones internacionales. La Asamblea también toma decisiones

relativas a la sección territorial de los programas de ejecución del plan de desarrollo de los Territorios de Ultramar. La Asamblea tiene facultad para establecer impuestos, derechos y contribuciones de todo tipo que constituyan ingresos del presupuesto territorial.

iii) Dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de una decisión de la Asamblea Territorial, el Jefe de la administración del Territorio podrá solicitar una segunda lectura o podrá solicitar al Gobierno francés su anulación por razones de ilegalidad. Las decisiones también podrán ser anuladas por el Consejo de Estado francés si se encuentran fuera de la competencia de la Asamblea.

iv) El decreto de 22 de julio de 1957 no modificó las facultades presupuestarias concedidas a la Asamblea Territorial por la legislación anterior, en virtud de la cual vota los créditos para los servicios territoriales y los impuestos necesarios para costearlos. Las decisiones sobre los asuntos fiscales están sujetas a los mismos controles por razones de ilegalidad que las otras decisiones. Además, si a principios de año no se ha votado un presupuesto equilibrado, el Gobernador establecerá el presupuesto en forma provisional y, si fuese necesario, en forma definitiva, sobre la base del presupuesto del año anterior. Cierta número de gastos todavía son obligatorios, aunque la lista se redujo considerablemente en virtud del decreto del 4 de abril de 1957. Los aranceles aduaneros también son fijados por la Asamblea Territorial. Sin embargo, sus decisiones en cuestiones de aduana deben ser sometidas al Gobierno de Francia para su aprobación y pueden ser anuladas por decreto, que deberá ser confirmado subsiguientemente por ley promulgada por el Parlamento francés.

d) Comisión Permanente

i) La Comisión Permanente está compuesta de cinco a siete miembros de la Asamblea Territorial y se reúne entre los períodos de sesiones de la Asamblea Territorial para tratar de los asuntos que le haya delegado ese cuerpo.

e) Representación en los órganos centrales de la República Francesa

i) La Somalia Francesa está representada en el Parlamento francés por un diputado y un senador. Asimismo tiene un representante en el Consejo Económico y Social francés.

Elecciones

19. El Territorio está dividido en siete distritos electorales. Las últimas elecciones para la Asamblea Territorial se celebraron el 17 de noviembre de 1963. El 76% de los 21.408 votantes registrados votó en las elecciones.

20. El 3 de diciembre de 1963 la Asamblea Territorial reeligió al Sr. Ali Aref Bourhan como Vicepresidente del Consejo de Gobierno por 27 votos a favor en un total de 32; los cinco votos restantes fueron considerados inválidos.

21. El Consejo de Gobierno se compone como sigue:

Vicepresidente y Ministro de Obras Públicas y del Puerto	Sr. Ali Aref Bourhan
Ministro de Hacienda	Sr. Raymond Pecoul
Ministro del Interior	Sr. Idriss Farah Abane
Ministro a cargo de la Administración Pública	Sr. Kamil Ali Mohamed
Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales	Sr. Hassan Mohamed Moyale
Ministro de Educación	Sr. Hassan Gouled Abtidon
Ministro de Trabajo	Sr. Abdi Ahmed Warsama
Ministro de Asuntos Económicos y del Plan de Desarrollo	Sr. Abdoukadar Moussa Ali

22. En el momento de la elección del Presidente de la República Francesa, celebrada el 19 de diciembre de 1965, el número de votantes registrados en Somalia Francesa era de 30.385, de los cuales 26.363 (o sea el 86,7%) depositó su voto. El General de Gaulle, cuya candidatura según se informa era apoyada por el Vicepresidente del Consejo de Gobierno y por el Presidente de la Asamblea Territorial, recibió 25.178 votos (o sea el 95,6% del total de votos), y el Sr. Mitterrand recibió 1.185 votos (o sea el 4,4% del total de votos)³.

Partidos políticos

23. Las principales organizaciones políticas del Territorio son las siguientes:

a) Union démocratique Afar, de la cual son miembros prominentes el Sr. Ali Aref Bourhan (Vicepresidente del Consejo de Gobierno desde 1960) y el señor Orbisso Gaddito.

b) Union démocratique Issa, dirigida por el señor Hassan Gouled Abtidon, actualmente Ministro de Educación.

c) Mouvement populaire, dirigido por el señor Obisieh Beuh.

24. El 20 de septiembre de 1963 siete dirigentes políticos del Territorio, pertenecientes a las tres organizaciones mencionadas, emitieron una declaración en París donde mencionaban la "debilidad del potencial económico del Territorio y la gran desproporción existente entre sus 80.000 habitantes y la población de los Estados vecinos". En esa declaración afirmaban que Somalia Francesa era y debía seguir siendo parte integrante de la República Francesa. Expresaban su confianza en la República y en el Jefe de Estado, General de Gaulle, "quien tomaría todas las medidas tendientes a promover la personalidad del Territorio". Por último, rechazaban "con indignación las ambiciones anexionistas y los reclamos territoriales de los países extranjeros".

25. En septiembre de 1964 cinco miembros de la Asamblea Territorial, junto con un ex Presidente y un ex Secretario, renunciaron al Mouvement populaire. Se dice que se oponían a una declaración promulgada por los dirigentes políticos en abril de 1964 favorable al mantenimiento del *statu quo* en Somalia Francesa.

26. Una misión de la Organización de la Unidad Africana (OUA), encargada de verificar los hechos, visitó a los Territorios vecinos de Somalia y Etiopía

³ Los votos recibidos por los candidatos a la Presidencia el 5 de diciembre de 1965, fueron como sigue: de Gaulle, 25.509; Mitterrand, 403; Tixier, 194; Lecanuet, 181; Barbu, 72; y Marcihacy, 43.

a principios de 1965 y concedió audiencia a refugiados de Somalia Francesa, incluso a representantes de un movimiento conocido como el Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) (Frente de Liberación de la Costa de los Somalíes). No se dispone de información sobre el resultado de la misión.

27. Además del FLCS, que tiene su sede en Mogadiscio, existe un segundo movimiento de liberación titulado Mouvement de libération de Djibouti (MLD) (Movimiento de Liberación de Djibouti), con sede en Dire-Dawa en Etiopía.

Poder judicial

28. El poder judicial está encabezado por el Procurador de la República Francesa, asistido por un delegado que reside en Djibouti. En asuntos penales, todos los habitantes del Territorio están sometidos a la jurisdicción única de la Corte Superior de Apelaciones, actuando en su carácter de tribunal penal único. En asuntos civiles y comerciales, ciertos asuntos entre partes autóctonas se llevan ante los jueces del derecho Sharia, los *cadis*.

Condiciones económicas

29. La actividad económica de la Somalia Francesa es principalmente comercial. Djibouti es un centro importante para el comercio, principalmente para el comercio de tránsito y de depósito, así como una estación de reaprovisionamiento de combustible para los barcos que cruzan el Mar Rojo.

30. La economía del Territorio depende en gran parte del ferrocarril Djibouti-Addis Abeba, cuya construcción se inició en 1896 en virtud de un tratado entre Etiopía y Francia, y se terminó en 1917. El largo total de la línea es de 486 millas (784 kilómetros), de las cuales 60 millas (98 kilómetros) están en Somalia Francesa. El tratado franco-etíope del 12 de noviembre de 1959 determinó la propiedad y la administración actuales del ferrocarril. Las principales disposiciones del Tratado son las siguientes:

- a) La compañía adquirirá nacionalidad etíope y tendrá su sede en Addis Abeba.
- b) Se fijará el capital de la compañía en 4.325.000 dólares etíopes, repartido en forma igual entre los accionistas franceses y los etíopes.
- c) Se formará la compañía por un período determinado, que tendrá fin el 31 de diciembre del año 2016.
- d) La compañía será administrada por un consejo de doce miembros nombrados por una asamblea general de accionistas.
- e) La asamblea general estará compuesta de dos grupos de accionistas, uno francés y otro etíope.
- f) Cada grupo nombrará a seis administradores, aprobados por sus respectivos Gobiernos.

31. La emisión total de acciones de la compañía se fijó en 34.600 acciones. De las tenencias etíopes, 15.570 acciones están en manos del Gobierno de Etiopía y 1.730 acciones, del Banco Comercial; de las acciones francesas, 9.483 están en manos del Gobierno de Francia y 7.817 de la empresa privada.

32. En 1949 se suprimieron los derechos aduaneros y la Somalia Francesa fue declarada territorio "franco". En ese año se le dio al Territorio una moneda propia, el franco de Djibouti, vinculado al dólar de los Esta-

dos Unidos; la emisión de billetes está respaldada en un 100% por un fondo de reserva en dólares de los Estados Unidos. El franco de Djibouti es convertible libremente en moneda extranjera⁴.

33. En 1964 entraron a Djibouti 2.567 barcos con un tonelaje total de 12 millones, en comparación con 2.091 barcos con 8 millones de toneladas en 1960 y 1.415 barcos con 5 millones de toneladas en 1955.

34. Al considerar el volumen de mercaderías que han pasado por Djibouti en años anteriores debe establecerse una diferencia entre las provisiones para los barcos, el comercio en tránsito hacia y desde Etiopía y el comercio del Territorio en sí. Las reexportaciones de productos del petróleo y de otros combustibles para abastecimiento de los barcos ascendieron a 1.500.000 toneladas en 1964, en comparación con 899.000 toneladas en 1960 y 595.000 toneladas en 1955. El tráfico de mercaderías ascendió a 281.000 toneladas en 1965, en comparación con 313.000 toneladas en 1963, 216.000 toneladas en 1960 y 205.000 toneladas en 1955. El comercio de tránsito hacia y desde Etiopía representó cerca del 85% del tránsito total de mercaderías en 1964.

35. Se ha informado que el Vicepresidente del Consejo de Gobierno se encontró con el Presidente de la República Francesa y con el Primer Ministro de Francia en París en enero de 1966. Conversó con este último sobre la necesidad de acelerar la terminación de nuevos amarraderos para reaprovisionamiento de combustibles en Djibouti destinados a aliviar el exceso de tráfico que no puede ser atendido en Adén, y nuevos pozos de agua para remediar los efectos de una sequía prolongada entre los nómadas del interior del país.

36. La agricultura en el Territorio es muy limitada debido a la insuficiencia de las lluvias. Se ha calculado la tierra cultivable en no más de 6.500 hectáreas y no se puede practicar el riego en gran escala. La población nómada, que se estimaba en unas 35.000 personas en 1961, se ocupa de la cría de ganado en pasturas dispersas y errantes.

37. La mayor parte de los bienes de consumo se importa de Francia, Etiopía, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Países Bajos, Italia, los Estados Unidos de América y los países asiáticos. En 1960 se evaluaron las importaciones en 2.877 millones de francos de Djibouti. Los servicios públicos y el turismo constituyeron las fuentes principales de ingresos que, con las exportaciones comerciales especiales, principalmente cueros y vacunos, ascendieron a 1.431 millones de francos de Djibouti en ese mismo año.

38. El comercio de tránsito hacia y desde Etiopía totalizó 26.000 millones de francos de Djibouti en 1964.

39. La Asamblea Territorial, en su período de sesiones dedicado al presupuesto, del 9 de diciembre de 1965 al 4 de enero de 1966, aprobó los proyectos de presupuestos territoriales para 1966. El presupuesto ordinario asciende a 1.912 millones de francos de Djibouti y el presupuesto extraordinario suma 196 millones de francos de Djibouti. El presupuesto territorial para 1961 ascendió a 1.134 millones de francos de Djibouti. El Territorio recibe ayuda de Francia por intermedio de los Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social (FIDES). En virtud del plan

⁴ En 1965, la paridad del franco de Djibouti con el dólar de los Estados Unidos era de 1 dólar = 215 FD.

de desarrollo que se está aplicando, Francia asignó recientemente 1.800 millones de francos de Djibouti para el desarrollo del puerto de Djibouti.

Condiciones sociales

Mano de obra

40. La legislación del trabajo consiste en el Código del Trabajo del 15 de diciembre de 1952⁵ y las ordenanzas del 31 de diciembre de 1953. En 1952 se estableció la Inspección del Trabajo y las Leyes Sociales, en 1953 se creó el Tribunal del Trabajo, y en 1954, la Oficina de la Mano de Obra.

41. Los conflictos laborales se examinan en primera instancia por el mecanismo de conciliación de la Inspección del Trabajo. Si este procedimiento fracasa, se lleva el litigio a un consejo de arbitraje.

42. En 1956 había cuatro organizaciones de empleadores y siete sindicatos. En 1956 la fuerza de trabajo se distribuía como sigue: 12.570 personas empleadas en la economía monetaria y unas 12.000 ocupadas en la agricultura tradicional. Las personas que trabajaban en la economía monetaria incluían 8.784 asalariados, de los cuales 2.340 trabajaban en el sector público y 6.444 en el sector privado. De las 6.444 personas empleadas en el sector privado, 2.000 eran extranjeros.

Sanidad

43. Los servicios sanitarios están bajo la autoridad del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Se dio término al hospital principal de Djibouti con ayuda de créditos del FIDES. El hospital tiene 600 camas y proporciona servicios médicos generales y quirúrgicos, así como servicios especializados. Tiene laboratorios radiológicos y bacteriológicos y una farmacia. También existen dos dispensarios policlínicos urbanos y un dispensario antituberculoso. En el interior del Territorio, cuatro dispensarios polivalentes prestan cuidados médicos a los habitantes de las localidades principales. Una unidad móvil proporciona atención médica a la población nómada.

Situación de la enseñanza

44. La enseñanza primaria pública es costeada por el presupuesto territorial y la enseñanza privada está subvencionada. El Gobierno metropolitano ha asumido la responsabilidad financiera de la enseñanza secundaria y la enseñanza técnica. El FIDES concede subvenciones para la construcción de escuelas. Hay escuelas en Djibouti y en las principales poblaciones de los distritos administrativos. La enseñanza es gratuita pero no obligatoria. Se informa que la proporción de la matrícula escolar era del 40% en 1964, en comparación con el 33% en 1963. No se dispone de cifras sobre la edad de la población escolar. El programa de estudios es el de las escuelas metropolitanas, adaptado a las condiciones locales.

45. En 1964, se proporcionaba enseñanza primaria en 14 escuelas públicas y seis escuelas privadas; la enseñanza secundaria se dictaba en dos escuelas públicas y dos escuelas privadas; la enseñanza técnica, en dos escuelas públicas y cinco escuelas privadas.

⁵ El Código de Trabajo fue modificado por ley del 8 de julio de 1964.

46. En 1964 la matrícula escolar era de 4.014 alumnos en la enseñanza primaria, 446 en la enseñanza secundaria y 337 en la enseñanza técnica.

Acontecimientos recientes

Incidentes de los días 25 y 26 de agosto de 1966

47. Se informa que hubo graves disturbios durante la visita del Presidente de Gaulle a Djibouti los días 25 y 26 de agosto. Gran número de manifestantes con carteles vocearon repetidamente la palabra "independencia", según se dijo, en el aeropuerto y en las calles. Luego se produjeron violentos encuentros entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El Presidente de Gaulle canceló un discurso que debía pronunciar al aire libre.

48. Hablando ante la Asamblea Territorial del Territorio, el Presidente de Gaulle dijo: "Los carteles que hemos leído y la agitación de quienes los llevaban no bastan para manifestar la voluntad democrática de este Territorio francés. Es posible que llegue el día, en que por medios democráticos, el Territorio exprese una opinión diferente de la que ha expresado hasta ahora... si un día pues — todo puede imaginarse — por medios regulares y democráticos el Territorio expresara una opinión nueva en lo que respecta a su destino, Francia tomaría nota de ello..."

49. Se anunció que los Ministros de Trabajo, Educación e Interior del Territorio anunciaron su renuncia.

Acontecimientos que siguieron a los incidentes de los días 25 y 26 de agosto de 1966

50. Los incidentes tuvieron por consecuencia, según estimación del Sr. Pierre Billotte, Ministro de Estado de Francia para los Departamentos y Territorios de Ultramar, cuatro muertos y 70 heridos (la mitad de los últimos, pertenecientes a las fuerzas de seguridad). El Sr. Billotte, hablando por la radio de Djibouti el 29 de agosto, manifestó que unos elementos extranjeros habían azuzado, para sus fines, a los descontentos porque estimaban que el Consejo de Gobierno local actuaba sólo en interés de una parte de la población. Era necesario establecer un mejor equilibrio entre los grupos étnicos.

51. El Sr. Billotte siguió diciendo que el espíritu de todos debía ser tranquilizado, pero que no era cuestión de represiones. Hacía falta volver a equilibrar el Consejo de Gobierno. La situación del Territorio evolucionaría por medios pacíficos. Podía convencerse al Gobierno francés de que se había producido un cambio en el pueblo. Era indudable que Francia no permanecería por la fuerza en la Somalia Francesa, mas sólo reconocería la voluntad del pueblo si ésta se manifestaba por medios legales.

52. El 31 de agosto se anunció que el Sr. Ali Aref Bourhan, Vicepresidente del Consejo de Gobierno, viajaría a París. El Sr. Bourhan partió el 2 de septiembre ostensiblemente para asistir a una reunión del Consejo Económico y Social Francés. El Sr. Hassan Gouled Abtidin, Ministro de origen somalí, que había renunciado el 29 de agosto — pero a quien se persuadió de que siguiera en funciones — reemplazó interinamente al señor Bourhan al partir.

53. El 9 de septiembre se anunció que el Sr. René Tirant había sido reemplazado como Gobernador de la Somalia Francesa por el Sr. Louis Saget.

Incidente del 14 de septiembre y medidas de seguridad subsiguientes

54. Se informó que se habían producido nuevos incidentes graves en Djibouti el 14 de septiembre. La multitud saqueó e incendió cuatro estaciones policiales. La policía intervino usando granadas y se impuso el toque de queda. Se dijo que por lo menos una persona había resultado muerta.

55. El 17 de septiembre se informó que, según fuentes oficiales, los últimos disturbios habían causado cinco muertes. Los manifestantes afirmaron, por el contrario, que habían muerto 21 personas.

56. Después de los nuevos disturbios, las fuerzas del orden, según se informó, llevaron a cabo muchas verificaciones de identidad y expulsaron a la República Somali a extranjeros cuya situación era irregular. Se dijo que se había deportado a unas 800 personas, y que 18 sospechosos habían sido llevados ante los tribunales, acusados, sobre todo, de saqueo, y que 726 personas habían sido detenidas. Aunque patrullaban las calles unos vehículos militares se afirmaba que la situación era más tranquila.

57. Se informó que los partidos de la oposición protestaban ante el nuevo Gobernador por los métodos brutales que usaban las fuerzas del orden.

58. El 20 de septiembre el Gobernador anunció que se había reducido la duración del toque de queda. Seguía en pie la verificación de documentos y se había expulsado a 164 personas más, mientras otras 308 se habían marchado voluntariamente.

59. El 23 de septiembre la radio de Djibouti anunció que se había puesto fin al toque de queda y que había cesado la verificación de documentos.

60. El 28 de septiembre se informó que se habían retirado las tropas de la ciudad y que la situación se había calmado perceptiblemente.

Declaración del Presidente de Gaulle y anuncio de un referéndum

61. El 15 de septiembre un vocero informó que el Presidente de Gaulle al regresar a Francia había manifestado en una reunión celebrada con sus ministros: "El pueblo debe saber lo que quiere, y expresarlo por medios democráticos; Francia deducirá las correspondientes conclusiones. Francia ha podido vivir sin la costa de Somalia. Está dispuesta a asumir las obligaciones que tiene hacia el pueblo del Territorio y a seguir unida a él, pero si éste quiere separarse, Francia no pondrá obstáculos en su camino."

62. El 21 de septiembre, después de una reunión del Consejo de Ministros de Francia se anunció que, en vista de la situación interna y externa de la Somalia Francesa, y habida cuenta de las disposiciones que podrían adoptarse por ley acerca de su situación y su destino con respecto al conjunto de los intereses de la República, en aplicación del título II de la Constitución, el Gobierno había decidido que el pueblo del Territorio fuese consultado directamente sobre el asunto mediante un referéndum que se realizaría antes del 1°

de julio de 1967. Se presentó al Parlamento el proyecto de ley relativo a esa consulta.

63. El Sr. Billotte, Ministro para los Departamentos y Territorios de Ultramar, en una reunión de prensa celebrada después del anuncio, manifestó que si la Somalia Francesa deseaba continuar unida a la madre Patria, podría modificarse en algo su situación actual de Territorio de Ultramar en el sentido de una mayor autonomía. Si, por otra parte, elegía la independencia, el pueblo debería comprender que ése sería el fin de la cooperación con Francia, y que ésta no seguiría prestando ayuda militar, económica ni financiera. El Ministro explicó que las condiciones exactas del referéndum sólo se determinarían después de consultar a los representantes del pueblo.

64. Al oír ese anuncio el Sr. Hassan Gouled Abtidon, Vicepresidente interino del Consejo de Gobierno, declaró que no le sorprendía la proposición del Presidente pero hubiera preferido que la Asamblea Nacional en París y la Asamblea Territorial en Djibouti hubieran discutido el asunto y se hubieran consultado al respecto antes que el Consejo de Ministros de Francia aceptara la propuesta. El Sr. Hassan Gouled agregó que todos los habitantes tenían el deber de examinar cuidadosamente dicha proposición.

65. El Sr. Sahatdjian, Presidente de la Asamblea Territorial, si bien sostuvo que las demostraciones no reflejaban los deseos de la mayoría del pueblo, manifestó que un referéndum era el único medio democrático de que el país expresara claramente su voluntad.

66. El Sr. Moussa Ahmad Idriss, jefe de la oposición, dijo que la declaración del Sr. Billotte había sido muy grata para los partidos de la oposición. Cuando se les preguntara en el referéndum si deseaban ser independientes o franceses, elegirían la independencia y aceptarían las consecuencias de ello.

B. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL⁶

Introducción

67. El Comité Especial examinó la cuestión de la Somalia Francesa en sus sesiones 429a. y 430a., celebradas en Mogadiscio, y en su 438a. sesión, celebrada en Addis Abeba, entre el 2 y el 8 de junio de 1966.

68. Durante su examen de ese tema el Comité Especial tuvo a la vista, además de las peticiones que abajo se relacionan, dos memorandos sobre la Somalia Francesa, fechados el 25 de mayo de 1965 y el 8 de junio de 1965 y dirigidos al Comité Especial por el Gobierno de Somalia (véase anexo II) y el Gobierno de Etiopía (véase anexo III), respectivamente.

Participación del representante de Somalia en las actividades del Comité Especial

69. En una carta de fecha 1° de junio de 1966 (A/AC.109/172), el Jefe de Gabinete del Primer Ministro de Somalia solicitó que se autorizara a una delegación somalí a participar en el examen de la cuestión de Somalia Francesa que el Comité Especial había de efectuar.

⁶ Véase el capítulo II (párrs. 595 a 619) para la reseña de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a los territorios examinados por el Comité en sus sesiones celebradas en África.

tuar durante sus sesiones en Mogadiscio. En su 429a. sesión el Comité Especial decidió acceder a esta solicitud sin ninguna objeción.

70. En una carta de fecha 4 de junio de 1966, dirigida al Presidente del Comité Especial por el Ministro de Relaciones Exteriores de Somalia (A/AC.109/172/Add.1) se solicitó autorización para que una delegación somalí tomara parte en el examen de esta cuestión por el Comité Especial durante sus reuniones en Addis Abeba. En su 438a. sesión el Comité Especial decidió acceder a esta solicitud sin ninguna objeción.

Peticiones escritas y audiencias

71. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones relativas a la Somalia Francesa:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento</i>
Sr. Abdillahi Ardeye, Secretario General, Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) ..	A/AC.109/PET.412
"Peuples Côte des Somalis"	A/AC.109/PET.413
Sres. Ahmed Bourhan, Secretario General, y Omar Abdullahi, Secretario de Información, Mouvement de libération de Djibouti (MLD)	A/AC.109/PET.414
Sr. Abdillahi Ardeye, Secretario General, Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) ..	A/AC.109/PET.464
Sr. Ahmed Bourhan, Secretario General, Mouvement de libération de Djibouti (MLD)	A/AC.109/PET.465
Dos peticiones de los Sres. Ahmed Bourhan, Secretario General, y Moussa Omar Hassan, Asistente del Secretario General, Mouvement de libération de Djibouti (MLD)	A/AC.109/PET.465/Add.1
Petición de la Somali Student Union y de la Somali Youth Union	A/AC.109/PET.485

72. En sus sesiones 429a. y 430a., celebradas en Mogadiscio el 2 y el 3 de junio de 1966, respectivamente, el Comité Especial escuchó a los Sres. Abdillahi Ardeye Abane, Djama Mahamoud Sultan, Omar Ahmed Youssouf, Osman Aden Youssouf, Abdillahi Waber Kalif, Ibrahim Taher y Djama Farah Abdi, representantes del Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS).

73. El Sr. Djama Mahamoud Sultan (FLCS) dijo que su país había sido una nación libre, soberana y unida durante miles de años, pero fue ocupada por la fuerza en el siglo XIX. A la invasión de la Costa de los Somalíes por Francia siguió una serie de tratados concluidos con ciertos sultanes y jefes de tribus corrompidos. En 1862, los primeros tratados firmados con los representantes del Sultán de Raheita y de Tadjoura concedieron a Francia el derecho a utilizar el atracadero de Obock y la costa entre el Ras Doumeira y el Ras Ali. En 1884, bajo la amenaza de la intervención de las fuerzas armadas, el Sultán de Tadjoura se vio obligado a firmar un acta de donación a Francia de los territorios de Ras Ali, Saguella y Goubet-El-Kharab. Otro tratado que transformaba el convenio de amistad y comercio del 9 de abril de 1884 en un regalo de tierras había sido obtenido del Sultán de Gobad el 2 de enero de 1885. En marzo del mismo año, los jefes de la confederación de tribus de Issa, engañados por promesas tentadoras, firmaron un tratado de amistad en virtud del cual los franceses ocuparon militarmente el Ras Djibouti.

74. Dijo que la Somalia Francesa es un punto de salida hacia el Cercano y el Extremo Oriente, Europa y África. Su economía se funda principalmente sobre la cría de ganado, el tráfico de su puerto, uno de los más modernos del Mar Rojo y del Océano Índico, el tráfico ferroviario y el del aeródromo internacional de Djibouti. Aunque no está explotado, el subsuelo de la Somalia Francesa es rico en minerales. La mayor parte de la población vive de la cría de ganado (camellos, cabras, ovejas y bovinos). Añadió que la política del Gobierno francés está encaminada a alejar los autóctonos de la vida económica del país y toda la economía está concentrada en manos de las grandes compañías francesas, mientras que el pequeño comercio se reserva a los extranjeros establecidos en el país. Los autóctonos, por su parte, proporcionan mano de obra a poco costo.

75. Para mantener a la población bajo su dependencia, el Gobierno colonialista francés se ha desinteresado totalmente de la evolución cultural. En la actualidad no existe en el país ningún establecimiento de enseñanza superior; en cuanto a la enseñanza secundaria, es prácticamente inexistente. La matrícula escolar no llega al 1%. Los niños no tienen derecho a seguir sus estudios después de la edad de 12 años. Se permite rendir examen sólo al 1% de los candidatos autóctonos, porque la administración colonial desea limitar el número de los autóctonos con diploma. Declaró que había que señalar que en el curso de más de un siglo de dominación, sólo una veintena de estudiantes autóctonos ha podido seguir sus estudios en Francia. Todavía no existe en el país un solo somalí con diploma de enseñanza superior; el número de los que poseen un diploma de enseñanza secundaria no supera a treinta.

76. En lo que se refiere a la salud pública, la Costa de los Somalíes posee sólo un hospital; las poblaciones principales de la región disponen cada una de ellas de un único dispensario. El hospital comprende dos clases bien diferentes; la primera es una clase de lujo dotada de todos los aparatos necesarios; está reservada a los colonos y a los extranjeros ricos establecidos en el país. En cuanto a la segunda clase, comprende algunos dormitorios de diez camas que representan la así llamada asistencia social gratuita. Los enfermos contagiosos, especialmente los tuberculosos, no están aislados de los otros enfermos. En esta forma, los enfermos hospitalizados en la segunda clase, cuando no mueren, muchas veces salen enfermos de males contagiosos como consecuencia de la insalubridad de las habitaciones y de la falta de cuidados y de alimentos. En este mismo momento, cientos de ciudadanos somalíes mueren víctimas de una epidemia de viruela que se propaga en el país, especialmente entre los somalíes, que no disponen de ninguna asistencia sanitaria. Para permitir que la epidemia se propague, la administración colonial expulsa, en lugar de poner en cuarentena, a los nómadas que llegan a la ciudad para hacerse tratar.

77. La tuberculosis diezma la población de la Somalia Francesa. Actualmente se cuenta un 10% de tuberculosos en la población urbana, que está mal alimentada y vive en condiciones de vivienda deplorables. La miseria y los estragos de la enfermedad son tales que no es raro ver a adultos que pesan menos de 28 kilos. Las familias de los enfermos viven, en general, en el desamparo más completo y muchos niños de la Somalia Francesa se abandonan y sufren hambre porque sus padres no pueden encontrar trabajo. Según las cifras oficiales del Gobierno francés, el 30% de los niños de seis años

y el 80% de los jóvenes de 16 años tienen reacciones cutáneas positivas. Conviene aclarar que la Somalia Francesa es el país con mayor incidencia de la enfermedad en el mundo, con un 16% de tuberculosos para el conjunto de la población.

78. Al pasar a las cuestiones judiciales, el peticionario declaró que existen dieciséis prisiones en la Somalia Francesa, sin hablar de los campos de concentración que abrigan constantemente a miles de presos. Caba señalar que ningún preso era de origen europeo. Desde el principio de la colonización francesa y aunque los europeos cometieran cotidianamente múltiples delitos, ninguno de ellos había figurado jamás en los registros de encarcelamiento.

79. En el plan político, el Gobierno colonialista francés aplica una política dictatorial y militar, una política de exterminación, opresión y desigualdad que alimenta la miseria y la ignorancia; se niega empleo a las minorías capacitadas, se condena arbitrariamente a los hombres políticos y a los jefes sindicales y religiosos, se expulsa en masa a los ciudadanos y se organizan *razzias* para poblar los campos de concentración. Por el contrario, se favorece la inmigración extranjera, en especial la de los colonos europeos: se les ofrecen empleos y se les conceden derechos cívicos a fin de que mantengan la presencia francesa en el Territorio. El resultado es que más de 20.000 habitantes de la Somalia Francesa se encuentran actualmente refugiados en el exterior, donde viven en condiciones lamentables y mueren por falta de alimentos y de cuidados. La comisión de la Organización de la Unidad Africana encargada de investigar, en enero de 1965, la situación de los refugiados de la Costa de los Somalíes ha podido comprobarlo.

80. Al presente la Somalia Francesa está en estado de sitio. Todas las organizaciones nacionalistas, ya se trate de organizaciones políticas, sindicales o aun de organizaciones de juventud, están prohibidas y se hostiga y persigue a sus afiliados. El Presidente del Parti du Mouvement populaire, Sr. Obsieh Boeuh, y otros cinco miembros de su comité han sido condenados a diez años de prisión efectiva. Toda la población está sometida a la amenaza de la fuerza de gendarmería y de los legionarios. En cada barrio existe un puesto de gendarmería con amplios poderes para arrestar a los ciudadanos y para efectuar allanamientos y revisiones sin orden judicial. En cuanto a los nómadas, que concurren con frecuencia a la ciudad para visitar a sus parientes o efectuar compras, siempre se los arresta y luego se los expulsa después de haber cumplido su condena. A los ciudadanos somalíes les es muy difícil obtener documentos de identidad o permisos de residencia, mientras que los extranjeros se los procuran con facilidad.

81. Francia ha transformado el país en una vasta base militar donde se encuentran concentrados más de 40.000 soldados (legionarios, infantería de marina, aviadores) expulsados de Argelia o de las antiguas colonias francesas. Esta base no solamente constituye un gran peligro para la Somalia Francesa sino también una amenaza para la totalidad de Africa y un desafío a la paz mundial. No hace mucho, una veintena de ciudadanos murieron por haber tocado las barreras electrificadas de alambre de púas instaladas en las puertas de la capital.

82. En la Somalia Francesa existe una asamblea territorial y un consejo de gobierno títeres. El consejo

de gobierno está presidido por el Gobernador francés, representante directo del Ministerio para Francia de Ultramar, mientras que la asamblea territorial está presidida por un armenio naturalizado francés. En contraste con las alegaciones de Francia, los miembros de esta asamblea y del consejo de gobierno no tienen ningún poder, fuera del de ejecutar las órdenes dictadas por la administración colonial.

83. En la época del referéndum de 1958, la Ley Fundamental de 1956 que actualmente rige ciertas colonias francesas fue impuesta a la Somalia Francesa después de una formidable campaña de propaganda constante por radio y a través de la prensa y merced a la corrupción, la intimidación y el fraude en las elecciones. Al comprobar el porcentaje de votos negativos (el más elevado después de la Guinea), a pesar de todas las fuerzas desplegadas para lograr un voto positivo, el Gobierno colonialista disolvió la asamblea territorial que seguía apoyando al vicepresidente del consejo de gobierno, Sr. Mahamoud Harbi, militante a favor del voto negativo, es decir, de la independencia, y encarceló a todos los partidarios del voto negativo (entre los cuales se contaban ministros, consejeros y sindicalistas).

84. En la Somalia Francesa no hay verdaderas elecciones sino simples nombramientos. Los partidos de la oposición y los hombres que demuestran sentimientos llamados "antifranceses" no están autorizados a presentar candidaturas. Además, las elecciones se desarrollan bajo la amenaza de las bayonetas y las ametralladoras.

85. En las últimas elecciones celebradas en noviembre de 1963, el Gobierno francés envió a la Somalia Francesa a 5.000 hombres de la marina, a bordo de una escuadra compuesta por el crucero antiaéreo de Grasse, barco almirante, del portaviones Foch, del conductor de flotilla Cassard, de los escoltas rápidos Picard, Gascon y Provençal, de los escoltas de escuadra Bourdonnais, Kersaint y Vauquelin, del petrolero reabastecedor La Saine, del barco de apoyo logístico Le Rhin y del submarino Daphné. Además, dos avisos de escolta, el Commandant Bory y el Doudart de Lagree, que no formaban parte de la escuadra, se reunieron con ella en Djibouti. No obstante, el Gobierno colonialista ha osado proclamar que el pueblo de la Somalia Francesa optó en 1958 por mantener los vínculos con Francia. Por el contrario, el General de Gaulle declaró el 3 de julio de 1959, en su visita oficial a Djibouti: "Francia, suceda lo que suceda, no se separará de la Costa de los Somalíes, vista su importancia estratégica y comercial."

86. Dijo que el FLCS, organización revolucionaria y popular que lucha por la libertad y la independencia de la Somalia Francesa, quiso aprovechar esa oportunidad para expresar al Comité Especial el intenso anhelo del pueblo del Territorio a liberarse completamente del régimen colonial; mientras tanto, pedía a Francia que respetara la resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

87. Convencido de que los métodos bárbaros utilizados por el Gobierno francés no podrán detener la justa lucha del pueblo somalí por el reconocimiento de sus derechos legítimos, enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el FLCS hacía un llamamiento a todos los Estados para que reconocieran la legitimidad de su lucha y le concedieran la ayuda moral y material necesaria, condenando la política colonial de Francia y su negativa persistente a aplicar la resolución 1514

(XV). Pedía igualmente al Alto Comisionado para los Refugiados, así como a los organismos especializados de las Naciones Unidas, que concedieran asistencia a los refugiados de la Somalia Francesa, y pedía al Comité Especial que solicitara de las Naciones Unidas la creación de una comisión para investigar la situación en la Somalia Francesa. El Comité Especial podría ejercer así presión sobre el Gobierno francés, a fin de que éste reconociera inmediatamente la independencia total del Territorio, respetara la integridad territorial del país, evacuara sus bases militares, pusiera en libertad a todos los dirigentes políticos, sindicales y religiosos detenidos injustamente, concediera amnistía a todos los políticos y refugiados en el exilio y les permitiera volver al país, y restableciera las libertades democráticas con el fin de que las organizaciones nacionales pudieran ejercer libremente sus actividades.

88. Respondiendo a preguntas formuladas por miembros del Comité Especial, el Sr. Djama Mahmoud Sultan declaró que los europeos constituían aproximadamente el 10% de la población total y que este porcentaje aumentaba sin cesar. La población europea comprende griegos, italianos, armenios y sobre todo franceses. La mayoría de estos últimos son militares. También hay funcionarios y nuevos colonos *pieds noirs* expulsados de Argelia. El Gobierno francés facilita asimismo la inmigración de extranjeros. En cambio, cada día se expulsa a algunos somalíes del Territorio. En total hay unos 40.000 militares y 10.000 civiles extranjeros en el país.

89. Añadió que han sido proscritos todos los partidos políticos y agrupaciones sindicales. El FLCS se ve obligado a actuar desde el exterior, pero cuenta con el apoyo total de la población. Además, ha sido reconocido por el Comité de Liberación de la Organización de la Unidad Africana (OUA). El FLCS fue fundado en Mogadiscio en junio de 1963. Agrupa antiguos consejeros de la Asamblea Territorial, miembros de sindicatos, partidos políticos disueltos y refugiados. En la época del referéndum de 1958, la casi totalidad de estos hombres habían sido expulsados del Territorio por haber militado en favor del "No".

90. Respecto a la existencia de otros movimientos, además del FLCS, empeñados en hacer cambiar la condición jurídica del Territorio, el peticionario indicó que todos los partidos políticos y todas las organizaciones sindicales estaban proscritos en la Somalia Francesa. Los dirigentes del Parti du Mouvement populaire, el único partido de oposición que existía anteriormente, fueron reducidos a prisión. En 1961, con motivo de la visita a Djibouti del Ministro francés para los Territorios de Ultramar, el Mouvement populaire organizó una gran manifestación y dirigió peticiones al Ministro. Además, envió a dos representantes a Francia para pedir a los poderes públicos franceses la independencia de Somalia Francesa. Por tanto, el Gobierno de Francia conoce muy bien las intenciones del Movimiento y por ello lo prohibió.

91. Añadió que era imposible determinar la composición del electorado en Somalia Francesa. Aunque se afirma que las elecciones se celebran conforme al sufragio universal, están viciadas por el hecho de que cualquier francés que esté de paso puede votar en el Territorio, mientras que se impide por todos los medios posibles que los autóctonos participen en la votación. Así, para las elecciones del 17 de noviembre de 1963, el Gobierno de Francia envió a Djibouti a 5.000 ma-

rinós para que tomaran parte en las elecciones. Declaró que el Territorio está dividido en cuatro circunscripciones: la de Djibouti, que tiene 14 consejeros; la de Ali Sabieh, que tiene 2; la de Dikil, que tiene 5; y la de Tadjoura Obock, que tiene 11. Cada una se divide en distritos. Por ejemplo, la circunscripción de Djibouti comprende cuatro distritos: uno europeo (4 consejeros), dos en el barrio autóctono (3 y 4 consejeros, respectivamente) y uno suburbano (2 consejeros).

92. Respecto a su declaración anterior de que en la Somalia Francesa existía un estado de sitio, manifestó que todas las fronteras están cerradas. Los autóctonos no pueden salir ni entrar. Los militares y los gendarmes, que incluso tienen el derecho de hacer pesquisas sin mandamiento judicial, organizan operaciones de vigilancia y colocan barricadas en las carreteras.

93. En cuanto a los campos de concentración mencionados antes, el peticionario declaró que en cada distrito o circunscripción de la Costa de los Somalíes existen campos de concentración llamados "campos penitenciarios". Los malos tratos infligidos a los prisioneros recuerdan curiosamente las prácticas nazis. La Costa de los Somalíes cuenta con seis campos de este tipo, custodiados por legionarios. Los prisioneros trabajan del alba hasta la noche y sufren indignidades del tipo más abyecto; innecesario decir que su alimentación es totalmente insuficiente. Cierta número de estos prisioneros muere todas las semanas por las brutalidades a las cuales se les somete y por la falta de cuidados.

94. Por lo que hacía a la situación laboral, el peticionario dijo que los trabajadores autóctonos mejor pagados no cobran siquiera un 20% del salario de un trabajador europeo que hace el mismo trabajo. Así, un mecánico blanco gana 90.000 francos de Djibouti por mes, en tanto que uno somalí sólo recibe 15.000. Cuando un obrero blanco especializado cobra 200.000 francos de Djibouti, un somalí recibe por el mismo trabajo sólo 20.000. Los somalíes ocupan empleos enteramente subalternos, como los de barrendero o ayudante de bar. En Djibouti, son estibadores. Sus condiciones de trabajo se rigen por un supuesto convenio colectivo, pero en realidad los propios empleadores fijan los salarios, ya que todos los dirigentes sindicales se hallan en la cárcel.

95. En materia de educación, el peticionario precisó que si bien Francia no ha hecho nada para educar al pueblo somalí, éste posee en cambio una cultura árabe. El número de analfabetos es relativamente poco elevado. La UNESCO nunca se ha ocupado en la alfabetización del país.

96. Respondiendo a las preguntas de los miembros del Comité, el Sr. Abdillahi Ardeye Abane recordó que, tal como se dice en el documento presentado por el FLCS, la ley fundamental entró en vigor en 1956. Se trataba de una reforma relativa a todos los territorios franceses de ultramar. Por tanto, no fue impuesta. En cambio, el referéndum de 1958 es producto del régimen de de Gaulle y resultado de una gigantesca campaña de intimidación y engaño. Dos días antes de las elecciones, unos barcos franceses hicieron escala en Djibouti so pretexto de realizar maniobras en el Mar Rojo, de modo que los votos de sus tripulaciones vinieron a viciar el resultado de las elecciones. Además, durante la campaña electoral, cada vez que un dirigente político partidario del voto negativo celebraba una reunión, la administración hacía que unos aviones volaran so-

bre el lugar de la reunión o bien enviaba tanques a fin de que no se oyeran las palabras del dirigente. Cuando la población se enteró de que se empleaban esos procedimientos indignantes organizó una gran manifestación a raíz de la cual se encarceló a Mahamoud Harbi, Vicepresidente del Consejo de Gobierno, a tres ministros y a un consejero.

97. El peticionario añadió que la Costa de los Somalíes tiene un estatuto parecido al de Angola y de Mozambique. La administración está totalmente en manos de los franceses, apoyados por un poderoso ejército que oprime a los somalíes y los tortura. Por lo tanto es una administración colonial, en el sentido más violento del término.

98. En lo que se refiere a la política seguida por la administración colonial en materia de educación, el peticionario aclaró que existen una o dos escuelas primarias por circunscripción y, en el propio Djibouti, algunas escuelas primarias y una escuela secundaria creada en 1963. Sólo 2.000 somalíes concurren a la escuela, es decir, menos del 1%. La administración colonial tiene cuidado de no formar cuadros, para limitar el número de maestros somalíes y dejar lugar a los maestros franceses. Además, paga muy mal a los maestros somalíes para descorazonar su contratación.

99. El peticionario manifestó, en cuanto a la economía del Territorio que, en efecto, Djibouti es una ciudad muy importante en el nivel económico y social, por razón de su situación geográfica. Es un puerto de tránsito hacia el Oriente Medio, que posee instalaciones modernas y cuyos estibadores son los más famosos del mundo por su trabajo; unos 350 barcos hacen escala en el puerto todos los meses. Desgraciadamente, la población no se beneficia en forma alguna de esta actividad económica, ya que las sociedades comerciales, los bancos y aun el pequeño comercio están en manos extranjeras. Asimismo, los dos grandes bancos franceses de Djibouti no conceden crédito alguno al pueblo del Territorio, pero hacen todo lo posible por ayudar a los inmigrantes, franceses y otros.

100. El Sr. Omar Ahmed Youssouf, en respuesta a las preguntas de los miembros del Comité, afirmó que no existe ningún plan de asentamiento de los nómadas. Por el contrario, la administración busca desembarazarse de ellos expulsándolos del Territorio. Como no tienen documentos de identidad se les considera como extranjeros y se les arresta en cuanto entran a la ciudad. Además, los legionarios prohíben el acceso de los nómadas a los pozos de agua, forzándolos así a desplazarse para encontrar otro punto de aprovisionamiento.

101. En la 438a. sesión, celebrada en Addis Abeba el 8 de junio, el Comité Especial dio audiencia al señor Ahmed Bourhan, Secretario General del Mouvement de libération de Djibouti (MLD) y a otros afiliados a esa organización.

102. El Sr. Ahmed Bourhan recordó que el MLD ya presentó una petición y un memorando en el anterior período de sesiones del Comité Especial e indicó que la situación en Djibouti no ha cambiado gran cosa desde entonces. Los habitantes de Djibouti que sufren bajo el yugo colonial aspiran profundamente a la libertad, pero no han entablado todavía la lucha porque esperan que gracias a la presión que las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana puedan ejercer sobre Francia, se resuelva pacíficamente la cues-

tión de Djibouti en el marco de la libre determinación de los habitantes del Territorio. Encareció al Comité Especial que haga en este sentido una última gestión ante Francia, Estado Miembro de las Naciones Unidas, y que tome una decisión inequívoca respecto a la cuestión de Djibouti.

103. El Sr. Ahmed Bourhan dijo, respondiendo a las preguntas de los miembros del Comité, que después del referéndum de 1958 todas las colonias francesas que habían votado afirmativamente pudieron ejercer en libertad su derecho a la libre determinación y han llegado a ser ahora Estados independientes. No ha sido ese el caso por lo que hace a Djibouti.

104. El referéndum de 1958 fue indudablemente falsificado. Pero aun suponiendo que no lo hubiese sido y que la población hubiese respondido verdaderamente en la afirmativa, Djibouti hubiera podido luego ejercer su derecho a la libre determinación como los demás países africanos que, con excepción de Guinea, habían votado afirmativamente. El peticionario no disponía de cifras concretas respecto al número de votantes. En el referéndum de 1958 hubo aproximadamente 6.500 votos afirmativos y 2.500 negativos. Los soldados franceses y sus familias votaron en Djibouti y participaron en las elecciones que siguieron a la consulta.

105. El MLD se creó en 1964. Su sede se halla en Dire Dawa, Etiopía, cerca de la frontera del Territorio de Djibouti, lo que facilita los contactos con la población del Territorio. El MLD lucha por la independencia, ya ha obtenido algunos resultados y se propone proseguir la lucha hasta obtener ese objetivo.

106. Respecto de la situación en el Territorio, el peticionario declaró que los franceses envían a Djibouti un número cada vez mayor de tropas y procuran paralizar completamente a la población. Todos los días los africanos son puestos en la cárcel, despedidos de su trabajo o expulsados del Territorio, ya sea por decisión de la justicia o simplemente por iniciativa de la policía o de los gendarmes. Casi la totalidad de la población auténticamente originaria del Territorio es nómada y vive en la región de matorrales con sus rebaños. El Gobierno francés no hace nada por ella; no ha edificado ninguna represa, ni perforado ningún pozo de agua. Los pocos hospitales existentes están situados en Djibouti mismo o en los lugares principales de los *cercles* y no están destinados a la población local, sino a los europeos. La situación es análoga por lo que hace a las escuelas. Los autóctonos son de religión musulmana y a la edad de seis años son enviados a la escuela coránica. A los nueve o diez años entran en la escuela francesa de la cual son obligados a salir a los doce o catorce años bajo el pretexto de tener demasiados años. Así, desprovista de toda formación secundaria la población originaria de Djibouti está relegada a la inactividad. Hasta ahora, sólo un autóctono ha logrado obtener el título de bachiller. Además, el Gobierno francés hace todo lo que puede por socavar la religión musulmana y la educación coránica.

Declaraciones generales de los miembros

107. El representante de Somalia dijo que el Gobierno de la República somalí tomó la iniciativa al pedir que la cuestión de la Somalia Francesa se incluyera en el programa del Comité Especial, puesto que está totalmente convencido de que se trata de un territorio no autónomo al cual se aplica la resolución 1514 (XV),

aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General, y puesto que como Miembro de las Naciones Unidas la República somalí tiene la especial responsabilidad de velar porque se aplique la resolución a los territorios habitados por somalíes que se encuentran bajo dominio colonial. El Gobierno somalí no es el único en sostener esta opinión. En la Declaración aprobada por la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados celebrada en El Cairo, en octubre de 1964, se dirigió un llamamiento al Gobierno de Francia "para que adopte las medidas necesarias para que la Somalia Francesa sea libre e independiente, de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

108. Declaró que en el memorando del Gobierno somalí (anexo II) se describe brevemente el actual régimen constitucional del Territorio con el fin de demostrar, sin género de dudas, que es un territorio no autónomo. Su condición, en suma, es la de una colonia. Toda la autonomía que se le ha concedido se limita a servicios territoriales internos y no comprende ninguno de los elementos esenciales del gobierno autónomo tales como la defensa, las relaciones exteriores, el poder judicial, la seguridad pública, la hacienda y la enseñanza superior. Además, incluso esta limitadísima autonomía interna está en manos de órganos políticos bajo control francés.

109. El referéndum de 1958 dio como resultado un voto afirmativo, como consecuencia de lo cual la Somalia Francesa adquirió el estatuto de territorio de ultramar, pero era ridículo llamar a esto una expresión de libre determinación. De una población que en 1958 se elevaba a 70.000 u 80.000 habitantes, el censo electoral comprendía solamente 15.833, de los cuales 8.661 votaron afirmativamente. El ejército francés por sí solo pudo reunir más de 5.000 votos, sin contar las esposas; por lo tanto, no hay que dar por hecho que la votación represente la voluntad del pueblo. En 1958 el Gobierno francés prometió que el resultado afirmativo de la votación no representaría una barrera a la futura libertad política. Los diputados de la Somalia Francesa pidieron en la Asamblea Nacional francesa, no una vez sino muchas, que se concediera la autonomía al Territorio. En todas esas ocasiones el Gobierno francés no tomó medida alguna. El Sr. Dualéh puede proporcionar a los miembros del Comité Especial, si así lo desean, información completa sobre los hechos que ha mencionado.

110. Si el Comité Especial estaba convencido, y el orador confiaba en que lo estaba de que la Somalia Francesa caía en su jurisdicción, entonces la única conclusión a que se podía llegar era que el Territorio debería ser liberado del control francés. Sin embargo, era evidente que se planteaban dos cuestiones diferentes.

111. La primera estaba relacionada con los medios por los que se podría liberar el Territorio. El Gobierno somalí instaba al Comité Especial a que utilizara todos los recursos morales y materiales disponibles, y se comprometía formalmente a dar su pleno apoyo para lograr este fin.

112. En su opinión, el Comité Especial también podía contar con la cooperación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y, en especial, del Comité de Liberación. Somalia era miembro de dicho comité y podía prometer su asistencia e influencia en él. Todos

los miembros de la OUA sin duda estarían de acuerdo en que el Comité de Liberación representa un instrumento valioso para ayudar al Comité Especial en cualquier política que pueda establecer. De modo análogo, ningún miembro de la OUA desea que el hecho de que este asunto esté en el programa del Comité de Liberación sea causa de que el Comité Especial abdique su responsabilidad en cuanto a la Somalia Francesa. Esto no se había hecho en el caso de otros territorios africanos y el orador confiaba en que no se haría en el caso de la Somalia Francesa. Había motivos de índole muy práctica para ello. En primer lugar, la capacidad de la OUA para ejercer presión sobre Francia — que no es miembro de la misma — era necesariamente más limitada que la de las Naciones Unidas, de las cuales Francia es Miembro. Asimismo, había una segunda dificultad práctica con la que se enfrentaba el Comité de Liberación: se trataba de la situación jurídica y política y de las actividades del Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS), establecido desde hacía mucho tiempo, y de un frente de liberación de reciente fundación que acababa de aparecer en Etiopía.

113. Añadió que, como el Comité Especial había de escuchar a las dos organizaciones y necesitaba toda la asistencia posible para evaluar la situación, haría algunas observaciones sobre los orígenes de ambas organizaciones.

114. El FLCS, creado en junio de 1963, opera desde Mogadiscio con completa independencia del Gobierno somalí. Tiene publicaciones periódicas y contactos frecuentes con el pueblo de la Somalia Francesa, y ha estado representado tanto en la conferencia de la OUA como en la de los países no alineados; ha presentado memorandos al Comité de Liberación y al propio Comité Especial. Cabía recordar que, durante el período de sesiones que el Comité Especial celebró en África en 1965, se recibió un cable del Sr. Obsieh Beuh, dirigente del Mouvement populaire, en el que comunicaba al Comité que el FLCS era el único representante legal del pueblo de la Somalia Francesa fuera del país. Dicho cable fue enviado clandestinamente desde una cárcel francesa en la que el Sr. Beuh disfrutaba por segunda vez de la dudosa hospitalidad de las autoridades francesas como resultado de sus actividades políticas. Su partido, el Mouvement populaire, había sido prohibido por el Gobierno francés y 105 de sus miembros habían sido detenidos. Quizás los miembros del Comité Especial habían leído estos datos en un comunicado publicado por el FLCS el 5 de junio de 1965. El FLCS es, por lo tanto, un movimiento ya establecido y de eficaz funcionamiento, reconocido como el único frente de liberación de la Somalia Francesa; en dicha capacidad recibe asistencia del Comité de Liberación. Esta era la situación hasta la víspera de la visita de una comisión investigadora de la OUA a Etiopía en enero de 1965, momento en el cual apareció de repente un nuevo "frente de liberación" llamado Mouvement de libération de Djibouti (MLD), del cual nadie había oído hablar antes y que tenía su sede en Addis Abeba. El orador lamentó tener que decir que el Gobierno somalí consideraba que se trataba de una organización establecida por el Gobierno de Etiopía con el propósito concreto de destruir la eficacia del FLCS.

115. Los miembros del Comité Especial podían preguntar cómo el Gobierno etíope, que como miembro del

Comité de Liberación está comprometido no sólo a reconocer el FLCS sino también a defender el principio de un frente único, podía conciliar esas obligaciones con el establecimiento de un segundo frente en Addis Abeba. Esta pregunta se la hacía todavía el Gobierno somalí. Sin embargo, aunque el aspecto moral quedaba oscuro, los motivos eran claros. Del comunicado y los memorandos del FLCS se desprendía que éste no está de acuerdo en absoluto con la política y las pretensiones del Gobierno de Etiopía. A este Gobierno no le interesa realmente la liberación de la Somalia Francesa sino solamente mantener el *statu quo* o anexas abiertamente dicho Territorio. Por eso Etiopía está dispuesta a destruir el FLCS, único movimiento de liberación representativo y eficaz.

116. Añadió que la segunda cuestión, más difícil, guarda relación con el porvenir del Territorio después de su liberación. Evidentemente, nadie desea que se convierta en una zona crítica, desgarrada por luchas intestinas o presa entre las rivalidades de Somalia y Etiopía. En opinión de su Gobierno, esto solamente se podía evitar garantizando que el porvenir político del Territorio fuera resultado de la libre elección de su pueblo.

117. A su juicio el Gobierno de Etiopía no comparte esta opinión. Señaló el memorando de 8 de junio de 1965 (anexo III) que la delegación de Etiopía presentó al Comité en Dar es Salaam en 1965. Este memorando equivale a sostener que la Somalia Francesa es en realidad territorio etíope. En el párrafo 24 se menciona el principio de la libre determinación, pero, según se desprende del párrafo 25, Etiopía solamente está dispuesta a apoyar las medidas en que se toman en cuenta los factores indicados en el párrafo 23. Esta es una posición un tanto curiosa para un miembro del Comité Especial, o sea, afirmar que apoyará la libre determinación siempre y cuando resulte en su propia anexión del Territorio.

118. Los "hechos escuetos" en que se apoya el Gobierno de Etiopía eran los siguientes: el primer "hecho", que desde tiempo inmemorial la Somalia Francesa ha formado parte de Etiopía. El extraordinario relato de la historia sobre la que se basa esta pretensión se encuentra en los párrafos 6 a 10 del memorando (anexo III). Añadió que no tenía la intención de entrar en una prolongada discusión sobre la historia de la zona, pero que había que refutar algunos de los argumentos del memorando etíope y corregir la tergiversación de los hechos.

119. No era verdad que la población de la Somalia Francesa reconociera tradicionalmente los derechos soberanos de Etiopía sobre su Territorio. Por lo que hacía a los afares, la situación histórica era la siguiente: mientras que antes del siglo XIX algunas de las tribus del norte (en Eritrea) habían caído bajo la autoridad nominal de los gobernantes de Tigre, las del centro y sur, con los que los reyes de Shoa tuvieron que permanecer en buenos términos para que sus caravanas pudieran pasar sin peligro hasta la costa, siempre fueron independientes en la práctica. El Sultanato afar más influyente, el de los aussas en el río Awash, se mantuvo independiente hasta el reinado de Menelik, durante el cual, en 1895, con el pretexto de que el Sultán se había aliado con los italianos (que entonces avanzaban hacia el interior desde la costa de Eritrea), se envió un ejército sohn contra él y se le obligó a pagar tributo. Al incorporarse aquella parte de Bankalia

a Etiopía después de la liberación de Etiopía, un ejército etíope llegó a Aussai en 1944, tomó prisionero al Sultán y se lo llevó a Addis Abeba donde murió en cautiverio. Después de esto, los Sultanes aussas continuaron pagando tributo a los etíopes. Es importante observar, sin embargo, que el Sultán aussa no es el jefe supremo reconocido por todos los afares, sino únicamente el jefe de uno de los mayores y más importantes de un grupo de pequeños principados afares independientes.

120. En lo que se refería a los issas, no había prueba de que debieren fidelidad tradicional a los gobernantes etíopes. En realidad, sólo se sometieron a la presión etíope después que Menelik conquistó el Estado musulmán independiente de Harrar en 1887. Desde aquella base las fuerzas de Ras Makonnen empezaron a hacer incursiones contra los issas, así como contra otras tribus somalíes. Además, el centro tradicional, en el que se habían instalado con regularidad en el pasado los jefes de los clanes issas, se encontraba cerca de Zeila, que en aquel tiempo caía dentro de la esfera británica. Los somalíes issas de la Somalia Francesa nunca demostraron ningún tipo de dependencia tradicional hacia los reyes etíopes.

121. Ciertamente no era verdad, como decía el memorando etíope, que hasta hacía cien años los puertos a lo largo del Mar Rojo y de las costas del Océano Índico habían sido etíopes. Por supuesto, durante mucho tiempo se comerció a través de ellos con diversos reinos de las tierras interiores etíopes a lo largo de los siglos, pero no se ejerció ninguna jurisdicción etíope sobre ellos. Es más, en el período de la participación colonial, al parecer la política deliberada de Menelik era alentar a las diversas Potencias europeas a instalarse en la costa, dejando el interior libre para él como zona en la que podía consolidar su autoridad. De este modo, sería verdad decir que la independencia etíope se ha mantenido a expensas de la colonización de la costa por las Potencias europeas.

122. No era verdad, como decían los etíopes, que Etiopía se hubiera visto obligada a concertar en 1897 un tratado fronterizo sobre la Somalia Francesa. La verdad más bien es que Francia se vio obligada, por su deseo de lograr el apoyo etíope para sus ambiciones en el Alto Nilo, a concertar dicho tratado con Etiopía. La obligación fue del lado francés y Etiopía consiguió nuevos territorios somalíes y afares como resultado del tratado; lo mismo ocurrió con el tratado anglo-etíope del mismo año. Francia y Gran Bretaña se disputaban la amistad de Etiopía y el apoyo a sus encontrados intereses en el Nilo, y Etiopía enfrentó a ambas Potencias con mucho éxito obteniendo, en cada caso, nuevo territorio somalí. También se estipulaba en el acuerdo que se construiría un ferrocarril franco-etíope desde Djibouti a Etiopía.

123. La referencia en el memorando etíope relativa a que Etiopía resistió los intentos del Sultán otomano Selim I, que trataba de imponer la soberanía turca sobre la costa somalí francesa, es una versión deformada de la historia. En el siglo XVI, cuando los portugueses estaban en posesión de los reinos etíopes cristianos, los musulmanes, por ejemplo Ahmad Gran, recibían ayuda de los turcos. Aunque al final las victorias musulmanas se convirtieron en reveses, los turcos continuaron en posesión de los puertos de Massawa, Suakin y Arkiko, en Eritrea. Djibouti no tenía entonces importancia real y sólo la adquirió cuando los franceses

lo desarrollaron. Basándose en que los turcos siempre se interesaron en la costa de Eritrea, Egipto hizo valer en 1866 sus pretensiones a la costa de Eritrea y Somalia, lo que dio lugar a la ocupación egipcia (1870-1884), que se extendió por el interior hasta Harrar en la región somalí.

124. Con respecto a la afirmación del memorando etíope de que Francia obligó a algunos jefes locales a firmar una serie de tratados en 1862 y 1885, era importante examinar los acontecimientos de aquel período en su perspectiva. La colonia francesa comenzó con la cesión del puerto de Obock a los franceses por los afares de la localidad en 1859, cesión que se convirtió en compra pura y simple en 1862. Después de la retirada de los egipcios del puerto de Tadjoura, los franceses, en 1883, afirmaron que sus dominios se extendían más allá de Tadjoura hasta cerca de Djibouti y, hacia 1885, después de concertar tratados de perpetua amistad con los issas de Ambad y Djibouti, reivindicaron también este pequeño puerto. Como resultado, se produjo una disputa con Gran Bretaña, que en aquel tiempo deseaba extender hacia el oeste el protectorado de Somalia Británica. El acuerdo anglo-francés de 1888 definió los límites entre los dos protectorados, situándolos entre Zeila y Djibouti y dividiendo, de este modo, las tribus issas. No se trataba tanto de coacción francesa como de protección francesa, a la que prestaban atractivo los temores de conquista etíope. Sería más exacto aplicar el término coacción a los métodos utilizados por Menelik en el siglo XIX para lograr el reconocimiento de autoridad en Aussa, entre algunos de los issas, los gadabursi y los ogaden, así como sobre muchos grupos galla.

125. El orador estaba de acuerdo, sin embargo, con la declaración contenida en el memorando etíope en el sentido de que la Somalia Francesa era una creación colonial artificial. Como entidad, no había existido antes de la colonización francesa. Pero esto no significa que haya sido parte de Etiopía. No había prueba alguna de que hubiese formado parte alguna vez del Imperio etíope, incluso en el momento de su expansión bajo Menelik. Los franceses no la separaron de Etiopía, sino que en realidad aumentaron los dominios etíopes con el tratado de 1897 por el que cedían parte de la costa somalí francesa a Etiopía. Cuando llegaron los franceses, no encontraron una serie de jefes vasallos de los etíopes sino una colección de pequeños principados y sultanatos independientes que sólo sostenían relaciones comerciales con Etiopía.

126. Dijo que se había distribuido entre los miembros del Comité Especial un mapa en el que se mostraban las diversas reivindicaciones de Etiopía respecto del Cuerno de África. Podía verse que, incluso en la comunicación dirigida por Menelik a las Potencias europeas en 1891 en la cumbre de su poder, las pretensiones etíopes no incluían la Somalia Francesa. En realidad, tanto las Potencias europeas como las africanas consideraron absurdas las reivindicaciones de Menelik. Ni los jefes danakiles ni los jefes somalíes de aquel territorio reconocieron jamás la soberanía etíope; tampoco tenían necesidad de ello, puesto que nunca veían a ningún etíope. Cabía observar que en el memorando etíope se había experimentado alguna dificultad ante la necesidad de conciliar las pretensiones de soberanía con el hecho de que aquellos jefes habían cedido el territorio a Francia y con el hecho de que, en virtud del tratado franco-etíope de 1897, los franceses redujeron de hecho la zona de su protectorado sobre la Somalia

Francesa a sus límites existentes. La única explicación que daba de ello el memorando era que se debía a la flaqueza humana.

127. El orador no quería entrar en más detalles sobre este aspecto de la cuestión. Lo que tenía importancia primordial eran los deseos del pueblo del Territorio en 1966. Los sueños de los colonizadores amharas del siglo XIX no tenían, o al menos no debían tener, nada que ver con esto. Sin embargo, en 1954, el Gobierno etíope obtuvo, por un tratado con Francia, la cesión de parte de este Territorio, en contra de la fuerte oposición de los diputados del Territorio en el Parlamento francés. No se debería permitir que eso volviera a suceder.

128. El segundo "hecho escueto" mencionado en el memorando etíope era que desde el punto de vista geográfico la Somalia Francesa formaba parte integrante del territorio etíope. En realidad, difícilmente podría encontrarse mayor contraste que el que existe entre la alta meseta de Etiopía, húmeda y montañosa, y la costa árida y desértica de la Somalia Francesa.

129. El tercer "hecho escueto" del memorando etíope era que el puerto de Djibouti dependía completamente del comercio de tránsito con Addis Abeba por el ferrocarril, que según los términos del tratado de 1959 ha pasado a estar bajo mayor control etíope sin referencia alguna a la Asamblea Territorial de la Somalia Francesa. Sobre este asunto también el diputado del Territorio elevó protestas en la Asamblea Nacional francesa. No se debería exagerar esta dependencia económica: el Territorio tiene otros recursos y para las tribus nómadas el ferrocarril no tiene importancia. Añadió que el Gobierno somalí estaba convencido de que había otros medios de salvaguardar y proteger los intereses etíopes con respecto al ferrocarril y las instalaciones portuarias, independientemente de la solución que se adoptara para el porvenir político del Territorio. En otras palabras, no se podía rechazar el principio de la libre determinación simplemente para servir a los intereses económicos de un Estado extranjero. Por supuesto, se debería proteger estos intereses mediante tratados de garantía, vigilancia internacional u otros medios semejantes, pero no había que pensar que Etiopía tenía derecho a apoderarse del Territorio en contra de los deseos del pueblo por causa de esos intereses económicos. El orador tenía entendido que los suizos, por ejemplo, comerciaban sin dificultad a lo largo del Rin y por los puertos holandeses sin tener que apoderarse por ello de Rotterdam.

130. También cabía observar que, para reforzar su afirmación de que la Somalia Francesa en realidad es parte de Etiopía, los etíopes se niegan a llamar al Territorio por otro nombre que no sea Djibouti, que es solamente el nombre del puerto. También se niegan a llamar somalí al pueblo que vive en el Territorio, y en vez de ello usan los nombres de las tribus. Aunque esto tal vez sea un asunto bastante trivial, representa, sin embargo, un indicio importante de los motivos profundos de la política etíope. También representa un intento deliberado de ocultar la clase de población que vive en el Territorio, lo cual es mucho más grave. Dijo que era completamente falso el cuadro que presentaban de las dos tribus principales, los danakiles, a los que algunas veces se llamaba afares, y los somalíes, al decir que forman parte de tribus etíopes mucho más numerosas que viven en Etiopía.

131. Recientemente, el 19 de julio de 1965, el semanario francés *L'Observateur* informó que el Embajador etíope en París había dicho que, cuando Francia se retirara de la Somalia Francesa, la mejor solución sería que aquellas tribus se unieran a su madre patria, Etiopía. Nunca ha habido tal patria etíope para estos pueblos. El Gobierno somalí ha tratado de dar un cuadro exacto, sobre la base del censo francés, en su memorando de fecha 25 de mayo de 1965 (anexo II). Básicamente, la realidad es que los somalíes predominan en el sur, incluido el puerto de Djibouti, y están vinculados con el pueblo de la República somalí por lazos de parentesco, cultura, tradición, lengua y religión. Los danakiles habitan las zonas septentrionales limítrofes con Etiopía y Eritrea. Pero no era deseo del Gobierno somalí acentuar estas diferencias: todos componen el pueblo de la Somalia Francesa y tienen derecho a la libre determinación. Además, el Gobierno somalí sinceramente esperaba y creía que, una vez libre de la intervención extranjera, el pueblo de la Somalia Francesa desarrollaría y demostraría una unidad de propósito que sería la base de su porvenir político y de su liberación del dominio colonial. Todo lo que su Gobierno pedía era que la liberación no se aplazara mucho tiempo, porque la actual política de los Gobiernos de Etiopía y Francia era expulsar a los somalíes del Territorio e introducir danakiles procedentes de Etiopía; se creía que ya se había expulsado de 12.000 a 18.000 somalíes. Esta política ya había sido condenada en la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General y la delegación de Somalia quería que se aplicara concretamente esta censura general a la política francesa en el Territorio.

132. En el memorando del Gobierno somalí al Comité Especial en 1965 se insta a las Naciones Unidas a que adopten ciertas medidas. Era motivo de gran satisfacción para el Gobierno somalí observar que dos de sus propuestas ya se habían puesto en práctica; una, con la afirmación por parte de las Naciones Unidas de que la Somalia Francesa es un territorio no autónomo al que se aplica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y otra, con la inclusión de la cuestión de la Somalia Francesa en el programa del Comité Especial y la afirmación de las Naciones Unidas relativa al derecho de dicho Territorio a la libre determinación, conforme a sus deseos libremente expresados.

133. Procedía reiterar, de momento, las restantes medidas recomendadas por el Gobierno somalí al Comité Especial para su examen: las Naciones Unidas deben pedir a Francia que conceda inmediatamente la independencia al Territorio, conforme al espíritu de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y de la Carta de las Naciones Unidas y que retire sus fuerzas armadas, sus funcionarios y demás instrumentos de control sobre el pueblo de la Somalia Francesa; en segundo lugar, deben pedir a todos los demás Estados que se abstengan de ejercer toda forma de presión directa e indirecta encaminada a tergiversar la libre expresión del derecho del pueblo a la libre determinación; en tercer lugar, inmediatamente después de que se conceda la independencia al Territorio, deben asumir la administración de éste durante un período de dos años, a fin de permitir la formación de un consenso político dentro del Territorio respecto de su porvenir; en cuarto lugar, durante el período de su administración, deben permitir el retorno al Territorio de todos los somalíes que, en los diez últimos años, hayan sido expulsados

o desterrados por los franceses, con sujeción a una comprobación adecuada por las Naciones Unidas de su vinculación al Territorio.

134. Se podría preguntar por qué el Gobierno somalí no pide que se conceda inmediatamente la independencia completa al Territorio. La preocupación de dicho Gobierno es garantizar que el pueblo obtenga una independencia real y no ficticia. Experimentaría grandes temores por el porvenir del Territorio si se forzara al pueblo a elegir mientras los franceses sigan allí o inmediatamente después de su retirada. Los franceses han impedido la formación de partidos políticos verdaderamente representativos y por lo tanto los habitantes del Territorio necesitan tiempo para establecer un programa político y para comprender los problemas con los que tienen que enfrentarse. En fecha tan reciente como 1963, *Le Monde* atribuía al Diputado por el Territorio en la Asamblea Nacional Francesa las siguientes palabras:

“El pueblo es incapaz de distinguir entre independencia, autonomía o régimen de territorio ultramarino. La falta de madurez política exige que se mantenga el *statu quo*.”

135. Dijo que el Gobierno somalí no deseaba mantener el *statu quo*: quería que se proporcionaran al pueblo garantías adecuadas para su libre determinación, libre de los franceses, de los etíopes o de cualquier otra presión exterior. En caso de que el Comité Especial pudiera idear medidas para garantizar al pueblo esta libre elección y protegerle de la intervención exterior, el Gobierno somalí ciertamente consideraría estas medidas como posible y adecuado sustitutivo del período de dos años bajo administración de las Naciones Unidas.

136. El representante de Etiopía dijo que su delegación se enorgullecía del historial de Etiopía en lo relativo a la liberación de los territorios coloniales, cualesquiera que sean su situación, extensión o fase de desarrollo. No era un secreto que Etiopía tenía hondo interés en el Territorio de Djibouti. Sin embargo, aunque no podía ofrecer una solución inmediata para el problema, su Gobierno, en cooperación con el Comité Especial, se esforzaba por encontrar los mejores métodos para aplicar la Declaración de 1960 en forma compatible con los intereses económicos y sociales de Djibouti. La conquista colonial del siglo XIX, aventura inhumana y despiadada llevada a cabo por ciertas Potencias europeas, siguió en todas partes el mismo sistema de opresión brutal, atrocidades y explotación. Por toda Africa, e incluso por todo el mundo, el colonialismo intervino en forma desastrosa en las vidas de los pueblos amantes de la paz. El colonialismo produjo daños incalculables, destrozando los lazos entre pueblos y dividiendo sin piedad su homogeneidad cultural y étnica. Djibouti es un ejemplo típico de las consecuencias decisivas y destructivas que tal sistema ha legado a los colonizados.

137. En relación con el nombre del Territorio, indicó que hacía unos meses, en otro caso, después de considerar los dos nombres “Islas Falkland” e “Islas Malvinas”, el Comité decidió emplear los dos, uno de ellos entre paréntesis. En el apogeo del colonialismo europeo se crearon muchos nombres nuevos, tales como Costa de Oro (Ghana), Rhodesia del Norte (Zambia), Nyasalandia (Malawi) y Rhodesia del Sur (Zimbabwe). El Territorio de Djibouti, separado ilegal-

mente de las zonas interiores de África oriental, también recibió un nombre nuevo. Etiopía, que continúa denominando a esa zona "Territorio de Djibouti", confía en que el Comité estudiará la aplicación a esa colonia del nombre apropiado.

138. El Territorio de Djibouti, que es una importante zona estratégica situada al este de Etiopía, abarca una extensión de unos 23.000 kilómetros cuadrados con una población aproximada de 80.000 habitantes, la mitad de los cuales viven en la capital. La mayor parte del Territorio linda con Etiopía y forma una sola unidad física con este país, con la excepción del Valle del Great Rift. En su mayor parte está formada por suelo árido, por lo que a su población no le resulta lucrativo dedicarse a la agricultura.

139. En opinión de su delegación, sería muy útil que el Comité pudiera emprender un estudio detenido de la historia antigua del Territorio, estudio en el que también debiera incluirse la unidad mayor de la que forma parte, social, económica e históricamente.

140. Etiopía ejerció durante siglos una soberanía plena e indiscutible sobre el llamado Cuerno Oriental. Durante ese tiempo, los puertos estratégicos y comerciales de la costa del Mar Rojo y del Océano Índico también se encontraban bajo la jurisdicción de Etiopía, sirviendo de puntos de salida a las zonas del interior y hasta aproximadamente un siglo antes el Territorio de Djibouti fue una de esas zonas estratégicas bajo la soberanía de Etiopía.

141. La primera tentativa fracasada de violar los derechos soberanos de Etiopía se hizo durante el siglo XVI, cuando el Sultán otomano Selim I decretó que la zona costera del Mar Rojo estaría bajo la influencia turca. Etiopía rechazó al agresor y restableció sus derechos soberanos. Una característica más significativa de la abortada invasión turca fue el hecho de que la dependencia *de jure* en que los jefes locales del Territorio de Djibouti se encontraban respecto a la autoridad del soberano etíope no sufrió modificación alguna.

142. Unos dos siglos después de la tentativa de invasión turca, se produjo un enfrentamiento más crítico entre el pueblo africano y ciertos colonizadores europeos. El Cuerno Oriental fue invadido por el Reino Unido, Francia e Italia, con el resultado de que Etiopía se convirtió realmente en una isla rodeada de un mar de colonialismo. Al mismo tiempo, el Territorio de Djibouti se transformó en una península francesa y adquirió por primera vez la categoría de unidad separada.

143. Francia emprendió la conquista del Territorio de Djibouti por razones diversas. En 1858, anticipándose a la apertura del Canal de Suez, el Gobierno francés buscaba un puerto a la entrada del Mar Rojo. El agente consular francés en Adén, Henri Lambert, fue enviado por eso al Golfo de Tadjoura. Su asesinato, producido en 1859, interrumpió temporalmente las negociaciones, pero fueron reanudadas después por el Capitán Fleuriot de Langle quien concertó un tratado el 11 de marzo de 1862, en virtud del cual Francia recibió el puerto de Obock y una pequeña franja de territorio por la suma de 10.000 talers de María Teresa. Entre 1862 y 1885, coaccionando a los jefes locales para que firmaran una serie de acuerdos, Francia adquirió también ciertos terrenos en el Golfo de Tadjoura y sus alrededores. Finalmente, en 1885, el Gobierno fran-

cés decretó el establecimiento de la "Côte française des Somalis et dépendances".

144. En 1882, Italia ocupó Assab por la fuerza, y Etiopía, que entonces se encontraba ya totalmente rodeada, no tuvo otra alternativa que levantarse en armas en defensa propia contra el rápido empuje colonial procedente del norte. Con grandes sacrificios, en 1896 la nación rechazó al agresor en Adowa. Sus recursos se habían agotado en otro combate mortal contra una Potencia extranjera en las costas orientales del Reino, por lo cual sólo pudo salvar parte de su territorio. De esta manera, se estableció el Territorio de Djibouti en la costa sudoriental de Etiopía, la cual tuvo que soportar esa injusticia y otras.

145. La gran mayoría de la población del Territorio de Djibouti habita dos zonas; de ellas, la más densamente poblada se encuentra circunscrita por el Mar Rojo y las tierras altas de Etiopía. La otra zona está limitada por el ferrocarril franco-etíope al sur y la península Buri al norte. Los grupos étnicos principales afectados son dos: los afar y los issas. De una población total de 200.000 afares, 160.000 habitan las provincias etíopes de Harrar, Wollo y Eritrea, mientras que los 40.000 restantes habitan el territorio de Djibouti en el que representan más del 50% de la población total. El grupo issa consta de unas 150.000 personas, de las que aproximadamente 20.000 viven en el Territorio de Djibouti y 100.000 en Etiopía. De los 500 kilómetros poco más o menos que forman el total de la frontera terrestre del Territorio, 400 kilómetros limitan con territorio etíope.

146. Djibouti, que se encuentra dividido en cuatro zonas administrativas, tiene categoría de Territorio francés de ultramar. En virtud de la ley de 1956, Djibouti obtuvo una autonomía reducida en cuestiones exclusivamente locales y a continuación del referéndum de 1958 conservó esa categoría. De esta forma, Francia asumió plena responsabilidad por las relaciones exteriores y la defensa, así como por ciertos asuntos locales.

147. De los tres partidos políticos principales, el mayor es la Unión Democrática Afar. Se encuentra también la Unión Democrática Issa y el Mouvement populaire. Una Asamblea Territorial, integrada por 32 miembros, tiene autoridad para ciertos asuntos locales seleccionados. Un diputado y un senador son elegidos para formar parte del Senado y la Asamblea Nacionales de Francia en París. Un Consejo Ejecutivo, que consta de ocho miembros, elegido por la Asamblea Territorial y presidido por el Gobernador francés, dirige los asuntos administrativos de Djibouti y está facultado para promulgar la legislación del Territorio.

148. Pasando luego a la situación económica y comercial del Territorio de Djibouti, el orador dijo que hay en él pocos terrenos adecuados para la agricultura. De una extensión total de 23.000 kilómetros cuadrados, sólo 65 hectáreas están siendo cultivadas. Hay poca o ninguna industria local, y la actividad económica se limita casi exclusivamente a la exportación de sal y a la pesca de tiburones y madreperlas. También se cultivan dátiles en menor escala. La principal fuente de ingresos del Territorio se deriva de los servicios prestados por su puerto, que es punto terminal de un ferrocarril de 496 millas de longitud que comienza en Addis Abeba, y que también atiende a una proporción considerable del comercio de Etiopía con el exterior. Se estima que todos los años pasan por el puerto unas 750.000

toneladas de alimentos, siendo transportadas por ferrocarril para su consumo en el Territorio una considerable cantidad de alimentos y de agua potable. Un ejemplo significativo del tráfico de exportación e importación en tránsito por el Territorio es el hecho de que en 1961-1962 las cantidades de mercancías transbordadas por los puertos de Djibouti y Assab estuvieron en la relación aproximada de 3:2. Era evidente, por lo tanto que, sin importaciones significativas de Etiopía, habría poca justificación para la existencia del Territorio como entidad separada.

149. A fines del siglo XIX, unos financieros particulares franceses se pusieron en contacto con el Gobierno de Etiopía en relación con una posible empresa común para la construcción de un ferrocarril de Djibouti a Addis Abeba. Las negociaciones dieron por resultado la concesión de 1894, hecha por el Emperador Menelik II. Aunque se inició con carácter privado, este ferrocarril fue posteriormente absorbido por el Gobierno francés. La vía férrea de 500 millas de longitud fue terminada en 1918, y desde entonces sirvió de lazo importante entre Etiopía y el mundo exterior. En 1959 se concertó entre Etiopía y Francia un tratado, que fue plenamente aprobado por la Asamblea Territorial y por el cual se repartía en partes iguales la propiedad y el control del ferrocarril. También incluía una disposición para que en Djibouti se establecieran funcionarios de Aduanas de Etiopía. En esta forma, los envíos destinados a Etiopía eran sellados y manipulados por los mismos funcionarios antes de ser transbordados para su destino definitivo. Además, en virtud del tratado, Etiopía fue también facultada para hacer uso de ciertas instalaciones portuarias de Djibouti. Así, por ejemplo, el Gobierno de Etiopía podía, si así lo deseaba, construir o adquirir instalaciones de tratamiento y fabricación dentro de la zona portuaria y trasladar y almacenar sus mercancías con exención de todos los impuestos locales, excepto los derechos del puerto.

150. Como ya mencionó anteriormente el orador, la industria local del Territorio de Djibouti es mínima. Las oficinas centrales de las compañías importantes que actúan en Djibouti están situadas en Addis Abeba. Además, la sucursal que el Banco Comercial de Etiopía tiene en el Territorio se dedica principalmente a financiar el comercio etíope de tránsito por Djibouti, mientras que las sucursales en Djibouti del Banque de l'Indochine, que tiene representantes en Addis Abeba, financia las exportaciones de café. Durante casi medio siglo, la línea ferroviaria que une las tierras altas de Etiopía con Djibouti desempeñó una función esencial en la economía de ambos territorios y en vista de la creciente interdependencia económica entre las naciones del mundo habrá de estudiarse un empleo más intensivo de las instalaciones portuarias. Djibouti es la puerta principal de salida de Etiopía a todas las regiones y, por lo tanto, constituye un corredor importante por el cual las principales materias primas de la nación tienen acceso al mercado mundial. Por estas razones, el porvenir de Etiopía y Djibouti depende de una colaboración más estrecha entre los dos territorios.

151. La delegación de Etiopía se había esforzado por ayudar al Comité a apreciar de manera realista la situación, facilitándole un resumen del desarrollo histórico de Djibouti. Merecían ponerse de relieve, en relación con esto, tres puntos básicos: primero, que el territorio costero de Djibouti fue durante muchos siglos integrante de Etiopía. Su así llamado estatuto de

separación fue concedido tan sólo 80 años antes, durante la dominación colonial europea. Segundo, que desde el punto de vista geográfico, el Territorio de Djibouti forma parte integral de la gran masa terrestre de Etiopía; y, tercero, que el Territorio de Djibouti depende económicamente de Etiopía.

152. Añadió que su delegación apoyaría sin reservas cualquier medida encaminada a resolver los problemas relativos al futuro de Djibouti y se reservó el derecho de hacer nuevas observaciones sobre este asunto.

153. En cuanto al memorando presentado por la delegación somalí, el orador consideraba que podría haber contenido propuestas más constructivas. Respecto al punto de vista de Somalia de que el movimiento de liberación de Addis Abeba podría destruir al de Mogadiscio, el pueblo de Djibouti tiene sin duda alguna pleno derecho a crear cualquier movimiento que él considere que ha de conducir a la independencia. Además, Mogadiscio, a diferencia de Etiopía oriental, se encuentra a unas 1.500 millas de Djibouti: la forma más lógica de luchar por la independencia era establecer el movimiento de liberación lo más cerca posible del pueblo que se trataba de independizar. Etiopía no podía objetar a un movimiento que el pueblo deseaba crear para luchar por su independencia.

154. En lo que hacía a la lucha contra el colonialismo dijo que Somalia obtuvo su independencia tan sólo seis años antes. Etiopía llevaba miles de años siendo independiente y había luchado por seguir siéndolo. El hecho de que Etiopía esté integrada por diferentes grupos étnicos es motivo de orgullo para sus compatriotas. Lamentaba que se le acusara de haber establecido un movimiento de liberación meramente para destruir a otro movimiento radicado en otra parte.

155. El representante de Somalia dijo que su delegación consideraba que el memorando de Somalia contenía propuestas imparciales y realistas para la solución del problema de la Somalia Francesa. La iniciativa de su Gobierno, al solicitar que la cuestión fuera incluida en el programa del Comité, fue motivada exclusivamente por la convicción de que el estatuto de Somalia Francesa representa un ejemplo típico de colonialismo. La delegación de Somalia, firmemente convencida de que al asunto se le aplica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, rechazaba categóricamente la afirmación de que, a consecuencia del referéndum de 1958, la Somalia Francesa era parte integral de la Francia metropolitana. La herencia cultural del Territorio, así como su situación geográfica y los sentimientos de su pueblo, demuestran que constituye en todos los aspectos parte integrante de la península somalí. A pesar de ese hecho irrefutable, las iniciativas de su Gobierno no estaban inspiradas en ningún plan de incorporar ese Territorio a la República de Somalia sino sólo en su deseo de garantizar que al pueblo se le otorgue su inalienable derecho a la libertad mediante la libre determinación, tal como se hizo con las antiguas colonias francesas de otras partes, sin ninguna presión indebida del exterior.

156. Añadió que su delegación lamentaba que el Gobierno de Etiopía, en vez de cooperar con Somalia en su lucha por la liberación de la Somalia Francesa, hubiera formulado demandas infundadas sobre ese Territorio, movido por su deseo de expansión. Tales demandas no se diferenciaban de las de Francia, que sos-

tenía que la Somalia Francesa era parte del territorio metropolitano.

157. En cuanto al nombre del Territorio, y con todo el debido respeto para el Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, el orador quería indicar que Djibouti es el nombre de una ciudad. De la misma manera que Addis Abeba es capital de Etiopía, así es Djibouti capital de la Somalia Francesa. En cuanto a los grupos étnicos, el orador estaba enteramente de acuerdo en que no deberían desempeñar ningún papel significativo en el moderno concepto del estado. Sin embargo, su delegación no podía convenir en que los issa son distintos de los somalíes. Deseaba además dar seguridades al Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía que su delegación en manera alguna tenía intención de dar lecciones de libertad e independencia a Etiopía; a la verdad, el pueblo somalí estaba orgulloso de que Etiopía hubiese conservado durante siglos su libertad e independencia.

158. El representante de Etiopía reiteró su punto de vista de que los issa son un grupo étnico diferente de los somalíes, y dijo que quizás la cuestión debería remitirse a los expertos. En cuanto al nombre del Territorio, señaló que el Estado y la ciudad de Kuwait tienen el mismo nombre.

C. NUEVO EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

159. El Comité Especial examinó de nuevo la cuestión de la Somalia Francesa en sus sesiones 470a. y 471a., celebradas en Nueva York el 6 y el 10 de octubre de 1966, respectivamente.

Participación de los representantes de Somalia en las actividades del Comité Especial

160. En su 470a. sesión el Comité Especial decidió, sin ninguna objeción, acceder a la solicitud del Representante Permanente de Somalia de que se invitara a su delegación a asistir en calidad de observadora a las sesiones del Comité Especial dedicadas a las audiencias de peticionarios relativas a la Somalia Francesa.

161. En su 471a. sesión el Comité Especial decidió, sin ninguna objeción, acceder a la solicitud del representante de Somalia de que se le permitiera hacer una declaración relativa a la Somalia Francesa.

Peticiones escritas y audiencias

162. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones adicionales relativas a la Somalia Francesa:

Peticionario	Documento
Dos peticiones de los Sres. Abdillahi Ardeye, Secretario General, y Djama Mahamoud Sultan y Abdulrahman Ahmed Gabot, miembros, Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS)	A/AC.109/PET.464/Add.1
Petición del Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS)	A/AC.109/PET.464/Add.2
Petición del Sr. Ahmed Bourhan, Secretario General, Mouvement de libération de Djibouti (MLD)	A/AC.109/PET.465/Add.2
Petición de los Sres. Ali Ahmed Udun, Mohamed Dahan, Ibrahim Dahir Egeh y Omar Aboubakar,	

Peticionario

Documento

Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS), y Abdulrahman Ahmed Hassan, ex miembro de la Asamblea Territorial de la Somalia Francesa.. A/AC.109/PET.551

Dos peticiones del Sr. Osman Aden Youssouf, Secretario de Relaciones Internacionales, Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) A/AC.109/PET.552

Sr. Jassin Abucar, Somali Students Union en Checoslovaquia A/AC.109/PET.560*

163. En sus sesiones 470a. y 471a., celebradas en Nueva York el 6 y el 10 de octubre de 1966, respectivamente, el Comité Especial dio audiencia a los señores Ali Ahmed Udun, Mohamed Dahan, Ibrahim Dahir Egeh y Omar Aboubakar, representantes del Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS), y al señor Abdurahman Ahmed Hassan.

164. El Sr. Hassan dijo que Francia tomó posesión nominal en 1884 del Territorio que actualmente constituye la Somalia Francesa, aunque no subyugó a toda la región sino después de transcurridos varios años. En 1888 se fijó la frontera con la Somalia Británica y en 1897 la correspondiente a Etiopía. Administrativamente el Territorio se divide actualmente en una circunscripción — Djibouti — y cuatro círculos, a saber, Ali Sabiet, Dikil, Tadjourah y Obock. Hay una Asamblea Territorial de 32 miembros, elegida por sufragio universal, que tiene poderes limitados según los fija la ley fundamental de 1956. El Consejo de Gobierno consta de ocho miembros elegidos por la Asamblea Territorial y está presidido por el Gobernador.

165. Añadió que el nacionalismo está profundamente arraigado en la Somalia Francesa. El Islam ha sido un factor importante en la unificación del pueblo y en crear una conciencia nacional. Además, el nacionalismo se ha desarrollado en instituciones tales como los sindicatos y las organizaciones juveniles y femeninas. La experiencia de dichas instituciones ha conducido a la creación del partido político conocido con el nombre de Rassemblement démocratique somali (RDS), cuyos candidatos ganaron los 30 puestos en las elecciones de lista única celebradas en 1957.

166. En el referéndum de 1958, Mahamoud Harbi, líder del RDS, realizó una campaña en pro del voto negativo, es decir, a favor de la secesión. Todos los somalíes (hombres) pudieron participar en el referéndum y, en forma contraria al espíritu de la ley fundamental, se permitió que participaran también los europeos, las fuerzas armadas, y un número desconocido de personas que se hallaban a bordo de barcos franceses en alta mar. A los europeos se les pidió que escogieran entre la cuarta República y la quinta República y, en cambio, los indígenas tuvieron que escoger entre *statu quo* y la secesión. Se dieron órdenes estrictas a las fuerzas armadas, formadas por unos 3.000 europeos, a fin de que votaran. Después de las elecciones, el Gobernador de la Somalia Francesa anunció que la mayoría de los votantes se había expresado a favor de Gaulle y de mantener el *statu quo*. Hubo gran controversia sobre la exactitud de las cifras publicadas. Estas revelaban

* Esta petición fue distribuida después que el Comité Especial había terminado su examen de la cuestión de la Somalia Francesa.

que el número de votantes inscritos sumaba 15.833 en una población de 200.000 habitantes.

167. El Sr. Mahamoud Harbi, líder del Gobierno y diputado por la Somalia Francesa en la Asamblea Nacional de Francia, protestó contra la manera de celebrar el referéndum.

168. Entonces, seis miembros del Consejo de Gobierno, instigados por el Gobernador, se negaron a ocupar sus cargos con el Sr. Harbi, aunque algunos días después retractaron su declaración sobre esa actitud. Por 15 votos contra 10 se rechazó una propuesta encaminada a disolver el Consejo apenas fuese convocado y a celebrar nuevas elecciones. A continuación las autoridades francesas de la localidad intentaron otra maniobra. El Gobernador había disuelto la Asamblea Territorial mediante decreto y había dispuesto que se celebraran nuevas elecciones. Resucitó a los partidos favorables a Francia, aprovechando las rivalidades personales, el sentimiento conservador general, y el interés egoísta de elementos burgueses. Permitió que los nuevos partidos celebraran mítines y dieran publicidad a su programa, y encarceló a muchos de los nacionalistas. También cambió el sistema electoral introduciendo un sistema proporcional en vez de la lista única, y realizando una nueva distribución de puestos. El partido Défense des intérêts économiques et sociaux du Territoire (DIEST) ganó once puestos; el RDS ganó cinco, pero éste — debilitado más aún por el exilio de varios de sus líderes, incluso Mahamoud Harbi — había perdido toda su eficacia.

169. La política del Gobernador, Sr. Compain, era "dividir para reinar". En forma deliberada alteró el equilibrio entre las tribus a favor de la tribu de Afar, pues se negó a expedir tarjetas de identidad a los issas, que son nómadas, y difundió el mito de que éstos deseaban crear una gran Somalia en la que se absorbía dicha tribu. Pero en ese momento surgió el Parti du Mouvement populaire, el cual no sólo representaba a la juventud del país sino también a las diversas tendencias. Su finalidad estribaba en crear de una manera pacífica un nuevo orden, mediante la liberación política y la abolición de la explotación económica y las barreras resultantes de la estratificación de la sociedad. Ese partido aboga por movilizar todas las energías del país con el objeto de lograr el gobierno propio y la independencia. Procura alentar la conciencia nacional y constituir las estructuras políticas que se necesiten para alcanzar los objetivos nacionales. Sus fines concretos son desarrollar y fortalecer el movimiento popular, fomentar la unidad entre los indígenas, promover la enseñanza secundaria y superior, facilitar la formación de funcionarios, trabajar en pro de la independencia de la Somalia Francesa, fomentar la evolución social y cultural de la mujer somalí, estimular la creación de sindicatos y organizaciones juveniles y femeninas, conseguir medios de autodefensa para el pueblo, y extirpar de una vez por todas la tiranía francesa.

170. El partido ha recibido un apoyo cada vez mayor entre la población y, en las elecciones legislativas de 1962 encaminadas a elegir representantes en la Asamblea Nacional de Francia, su candidato derrotó fácilmente al del gobierno. Hassan Gouled, perteneciente al DIEST, recibió un número muy reducido de votos. La escasa participación reveló falta de interés en las elecciones por parte de las autoridades locales.

171. Para combatir a los nacionalistas, las autoridades francesas han creado una fuerza de policía poli-

tica, que se ha infiltrado en las filas del PMP. Las actividades de este partido se vieron entorpecidas por las detenciones y la intimidación, y los miembros que eran nacionales de la Somalia Francesa fueron expulsados del país utilizando falsos pretextos.

172. Las autoridades francesas se han negado a inscribir a las mujeres en los padrones electorales y sólo han expedido tarjetas de identidad a cierta categoría de nacionales. Se ha vuelto a hacer una nueva distribución de los puestos y ha quedado reducido el número de éstos correspondientes a Djibouti, donde se halla la mitad de la población del Territorio. En las elecciones de 1963, el PMP obtuvo cuatro de los catorce puestos de Djibouti y los dos de Ali Sabiet. El resultado de la votación hubiera sido más elevado si no hubiese sido por los votos de las tripulaciones de barcos atracados en el puerto, que dieron cuatro puestos más a los europeos.

173. Las autoridades francesas han seguido utilizando todos los medios de presión de que disponen, a fin de debilitar aún más la posición de los nacionalistas. Cabe advertir que en la Somalia Francesa es posible que un funcionario sea elegido a la Asamblea sin perder su puesto en la Administración, lo que constituye un medio eficaz de presión, sobre todo porque es difícil que la persona que se ha granjeado la ira del Gobierno obtenga empleo. De esta manera se ha reprimido virtualmente al partido, aunque lo único que deseaba era el gobierno propio dentro de la Constitución de 1958, a fin de abolir las estructuras económicas coloniales, fomentar la producción alimentaria con el objeto de depender menos de Etiopía, explotar los recursos minerales del Territorio, construir una presa en el Lago Assal y establecer una industria de productos químicos e industrias basadas en la pesquería y la ganadería, mejorar el ganado, y desarrollar los servicios portuarios.

174. La política de Francia en esta región representa un vivo contraste con los principios que profesa. Ello se puede explicar por el hecho de que Francia atribuye importancia a la Somalia Francesa por su posición estratégica y como punto de relevo para las nuevas instalaciones de ensayos nucleares en el Océano Pacífico. Hay nuevas disposiciones en virtud de las cuales los indígenas pueden ser encarcelados sin juicio y sometidos a extradición si se les acusa de menoscabar la integridad territorial del país. A los detenidos se les trata como delincuentes comunes y se les priva de sus derechos de ciudadanía. Es interesante que jamás se ha detenido a un europeo en la Somalia Francesa por delitos políticos ni en virtud del derecho penal. Es evidente que el sistema judicial del Territorio depende del capricho arbitrario del Gobernador. En 1958 se detuvo al Ministro de Asuntos Interiores por haber autorizado un mítin solicitado conforme a la ley por el diputado de la Somalia Francesa en la Asamblea Nacional. El Procurador de la República protestó contra ello, pero se vio obligado a seguir las instrucciones del Gobierno.

175. A los indígenas se les detiene por no llevar su tarjeta de identidad y se les condena a trabajos forzados en el interior del Territorio. Esa política tiene la doble finalidad de suministrar mano de obra barata para la construcción de carreteras e instalaciones estratégicas, y debilitar las filas de los nacionalistas. Muchas personas han muerto a causa de las condiciones de vida en que se les ha mantenido.

176. Los pastores nómadas están sujetos a restricciones cada vez mayores; se les limita a una zona res-

tringida de la Somalia Francesa so pena de perder su ciudadanía. Esas medidas tienden a alentar a los nomadas nacionalistas para que abandonen el Territorio. Se ha podido resolver el problema mediante un censo de la población, la expedición de tarjetas de identidad, y la cooperación entre los administradores de distrito y los jefes tribales en la labor de identificar a los individuos. Es evidente que a Francia le interesa asegurarse de que no haya una mayoría de votos afirmativos en un plebiscito relativo a la independencia.

177. En 1959 el Gobierno de Francia concertó un tratado con Etiopía, por el cual se trasladó a Addis Abeba la sede de la Compagnie Franco-Etiopienne, se concedieron a esa compañía muchos privilegios en el Territorio y se estableció una oficina de aduanas etiope en el puerto de Djibouti. La Asamblea Territorial, a la cual no se había consultado sobre el particular, condenó unánimemente la acción de Francia. Mediante un tratado análogo, celebrado en 1954, se había cedido a Etiopía una parte del Territorio de la Somalia Francesa.

178. Con respecto a la enseñanza, la tasa de asistencia escolar parece ser elevada pero lo cierto es que se siente la influencia de la "política de Compain", que estriba en crear barreras sociales entre los distintos grupos. Se ha menoscabado la política de integración entre los blancos y los indígenas, y la situación se ha agravado debido a la afluencia de franceses sin educación que proceden de otras ex colonias de Francia. Actualmente se enseña a los niños europeos e indígenas en aulas separadas. La enseñanza tiende al alfabetismo y nada más. Solamente unos pocos escolares tienen permiso para recibir enseñanza secundaria y a la mayoría de éstos no se les permite alcanzar el nivel del bachillerato. Por consiguiente, no hay una minoría intelectual selecta y en el Territorio sólo dos habitantes han recibido títulos universitarios.

179. El ejército se compone casi totalmente de personas oriundas de la Francia metropolitana. Se evita sistemáticamente el nombramiento de oficiales indígenas, y a los suboficiales somalíes que han cumplido 15 años de servicios se les obliga a volver a la vida civil.

180. Como resultado de los sucesos recientes, en la actualidad la población ya no procura conseguir el gobierno propio sino que pide la independencia. Hay un movimiento encaminado a la reconciliación nacional, y ahora el PMP colabora estrechamente con la Union démocratique Afar, nuevo partido dinámico que se ha unido a la oposición. Ese factor refuerza muchísimo el movimiento nacionalista y debilita la posición del régimen actual. Es probable que después de ello se facilite la integración entre diversos grupos. La reconciliación de los principales grupos indígenas influiría favorablemente en las relaciones con los países vecinos.

181. A los observadores informados no les han sorprendido los recientes sucesos en la Somalia Francesa. Durante mucho tiempo una causa del descontento ha sido el poder absoluto del Gobernador, el cual ha sido virtualmente un monarca, a pesar de la existencia de una asamblea deliberante y un Consejo de Gobierno. Por sus medidas arbitrarias se ha granjeado el odio de la población, la cual esperaba la llegada del General de Gaulle para actuar, ya que al asumir el poder, éste había defendido el derecho de los pueblos a la libre determinación. Pero a raíz de las luchas callejeras recientes, se detuvo a más de 3.000 personas y se expulsó a casi 1.000 personas hacia la República de Soma-

lia, cuyo Gobierno se vio obligado a internarlos en una zona neutral donde viven en completa pobreza.

182. El General de Gaulle comunicó a la Asamblea Territorial que, si el Territorio manifestase una nueva actitud sobre su porvenir, mediante los procesos democráticos, Francia tomaría nota de ese hecho. Pero el Gobierno francés se opuso a la convocación de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea. Lo cierto es que la presencia de Francia se considera indispensable en el Territorio para mantener en manos del Occidente el litoral meridional del Bab-el-Mandeb, a fin de garantizar la supervivencia de Etiopía — baluarte cristiano en un mar islámico — y retener Djibouti como lugar de refugio para Francia en caso de conflicto.

183. La respuesta de los nacionalistas es que los deseos del pueblo no se pueden expresar mientras continúan las medidas represivas adoptadas por las autoridades francesas. El pueblo desea que se le permita ejercer su derecho inalienable de libre determinación y no tiene esperanza alguna en las negociaciones con Francia.

184. Recientemente el Gobierno francés anunció que se celebraría un referéndum en la Somalia Francesa antes del 1° de julio de 1967. Según información recibida, se pediría que la población escogiera entre la independencia y el régimen del territorio de ultramar con autonomía interna considerable. Pero desgraciadamente, la experiencia de las consultas populares bajo el régimen colonial no es alentadora. No se impugna la buena fe del General de Gaulle, pero es bien conocido el abismo que puede existir entre un gobierno metropolitano y la administración colonial. En todo referéndum de esa índole, es importante que la votación se limite a la población indígena. Deben abrogarse todas las leyes y medidas represivas, tales como las restricciones impuestas a los partidos políticos, los sindicatos y la prensa. Debe ponerse en libertad a los presos políticos que ascienden a más de 3.000, y debe permitirse que los exiliados regresen al Territorio. En fin, el gobierno debe colocarse en manos de los líderes políticos, que cuentan con el apoyo del pueblo. El pueblo de la Somalia Francesa no puede olvidar el disfraz del referéndum de 1958. No bastarán las declaraciones verbales; es indispensable que haya garantías internacionales en forma de una presencia de las Naciones Unidas con el objeto de organizar y fiscalizar el referéndum y las elecciones generales que le seguirían. El orador opinó que, en vista de las amenazas y afirmaciones infundadas que se habían formulado, las Naciones Unidas deberían garantizar también la integridad del Territorio y su soberanía, en caso de que el pueblo de la Somalia Francesa optara por la independencia.

185. Conforme a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, el orador pidió al Comité lo siguiente: independencia completa e inmediata para el Territorio; respeto a su integridad territorial; restablecimiento de las libertades democráticas, libertad de los presos políticos, sindicales y religiosos; amnistía para los refugiados políticos y regreso de los mismos a su patria; no injerencia en los asuntos internos del país y abstención por otras naciones de ejercer presión directa o indirecta; cesación inmediata de las medidas de expulsión y prestación de ayuda a los refugiados por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y los organismos especializados.

186. Dijo, en respuesta a las preguntas de los miembros del Comité Especial, que los acontecimientos últimos, en el curso de los cuales hubo cierto número de víctimas, fueron ciertamente el resultado de las demandas de independencia del pueblo. Añadió que podría proporcionar al Comité documentos con detalles sobre lo ocurrido. La Potencia Administradora dio a entender que habían intervenido elementos foráneos, pero esa afirmación era totalmente falsa.

187. En cuanto a la declaración del Presidente de Gaulle, en el sentido de que el pueblo de la Somalia Francesa podía obtener su independencia, si la quería, el peticionario indicó que las circunstancias en que se celebró el referéndum de 1958 en la Somalia Francesa fueron al parecer diferentes de las de otros antiguos Territorios franceses. El jefe del partido autóctono se pronunció entonces por un voto negativo; pero la Potencia Administradora intervino en el referéndum y afirmó además que había habido mayoría de votos afirmativos. En realidad se reformó deliberadamente el régimen electoral para que los nacionalistas fueran sólo una minoría en la Asamblea Territorial. El peticionario reiteró que el pueblo no duda de la buena fe del Gobierno de Francia o del Presidente de Gaulle, pero que le preocupa la aplicación local de la política del Gobierno francés. La *Loi-cadre*, por ejemplo, nunca ha sido aplicada efectivamente en el Territorio.

188. Añadió que era esencial la presencia de representantes de las Naciones Unidas para asegurar la participación de los indígenas en el referéndum propuesto, cosa imposible mientras se los está encarcelando y expulsando en grandes cantidades. Antes que se celebre un referéndum debe ponerse en libertad a los detenidos políticos y permitir que los partidos desarrollen libremente sus actividades e informen al pueblo sobre los hechos. En las actuales circunstancias un referéndum carecería de sentido.

189. En cuanto a las cuestiones económicas, señaló que bajo el régimen actual el Territorio no obtiene prácticamente ningún ingreso de los ferrocarriles, ya que los etíopes no pagan prácticamente nada por los servicios de tránsito.

190. El Sr. Dahan (FLCS) dijo que entre los detenidos políticos figuran algunos que están encarcelados desde 1958. El Sr. Hassan fue detenido en 1959 y estuvo en la cárcel hasta que se escapó en 1965. El propio orador también estuvo cierto tiempo en prisión, pero la gran ola de detenciones se produjo después de los sucesos de agosto de 1966, cuando el Presidente de Gaulle visitó el Territorio. En esa oportunidad el pueblo quiso demostrar su anhelo de independencia porque se decía que en el referéndum de 1958 se había comprobado que el pueblo quería seguir bajo el dominio francés. Las demostraciones continúan. Declaró que no podía dar el número exacto de presos, pero sabía que pasaban de 3.000; el número de expulsados de la República de Somalia era de 3.486. En los desórdenes hubo unos veinticinco heridos y unos veinte muertos.

191. Manifestó que algunas veces se había tratado de crear divisiones en los países recién emancipados y que el pueblo quería tener la seguridad de que se respetaría la integridad del Territorio.

192. Las Naciones Unidas podían ayudar a garantizar la libertad democrática en el Territorio; la situación era actualmente análoga a la de Angola y Mozam-

bique, donde no existían verdaderas organizaciones sindicales y donde los partidos políticos, las organizaciones juveniles y las organizaciones femeninas carecían de libertad de acción. Se habían dirigido a la Organización Internacional del Trabajo denuncias sobre la violación de convenios internacionales de trabajo.

193. Las Naciones Unidas podrían también fiscalizar la composición de los padrones electorales con anterioridad al referéndum. Bajo la administración colonial no hay garantías de que los padrones electorales sean correctos. A su juicio era importante tener la seguridad de que no participarían en el referéndum los miembros de las fuerzas armadas francesas ni sus esposas.

194. Las elecciones podrían celebrarse unos seis u ocho meses después del referéndum. Le parecía esencial que se permitiera a todos los desterrados políticos regresar al país y que todos los partidos políticos participaran en las elecciones. El Territorio tiene dos partidos nacionalistas — el Parti du Mouvement populaire y la Unión démocratique Afar —; ambos persiguen el mismo objetivo de independencia para Somalia Francesa. Cuando el General de Gaulle visitó el Territorio esos partidos constituyeron un comité de coordinación. En cuanto al partido del peticionario, que funcionaba en el exilio, tenía los mismos objetivos.

Declaraciones generales de los miembros

195. El representante de Etiopía convino en que las fronteras del Territorio de Djibouti y Etiopía son artificiales. Por ejemplo, de las cuatro Sultanías Afar de Rahayto, Aoussa, Gobaad y Tadjoura, sólo la última está enteramente comprendida en territorio de Djibouti y todas las demás se extienden en Etiopía, donde viven el 80% de los afares. Otro tanto ocurre con los issas, el 75% de los cuales vive en Etiopía. Las fronteras son, pues, artificiales y fueron impuestas a los pueblos del Territorio y de Etiopía por el colonialismo. Añadió que el peticionario se refirió al tratado de 1959, relativo al ferrocarril que une Djibouti y Addis Abeba, pero que debía señalar que de los 784 kilómetros del ferrocarril sólo 98 se encuentran en el territorio de Djibouti. Todo el tráfico del ferrocarril consiste en importaciones y exportaciones de Etiopía y representa el 85% de las mercancías que pasan por el puerto. No tiene nada de extraño, por lo tanto, que el puerto y el ferrocarril sirvan al Territorio y a Etiopía a la vez. Manifestó que el peticionario se refirió también al tratado de 1954 por el que se delimitó la frontera: esa demarcación fue ratificada por las autoridades competentes. El peticionario sostuvo que por el tratado se privó al Territorio de una zona que podría ser un verdadero granero. Según un estudio sobre la Somalia Francesa, en 23.000 km² de la superficie sólo hay 65 hectáreas de tierras laborales y hay 2.200.000 hectáreas no aptas para el cultivo. Tanto antes como después de 1954 la riqueza del Territorio ha derivado totalmente de la combinación del puerto y del ferrocarril.

196. El representante de Somalia declaró que su país surgió como nación soberana hacía sólo unos pocos años, gracias a la aplicación de los principios de las Naciones Unidas, y que su Gobierno, deseoso de consagrar todos sus esfuerzos al desarrollo pacífico del país, estaba animado por un sincero deseo de vivir en paz y amistad con todas las naciones.

197. La grave situación planteada en la Somalia Francesa causaba grave preocupación a Somalia, cuyo Gobierno estaba convencido de que la fiel aplicación de los principios de las Naciones Unidas podía y debía resolver el problema de la Somalia Francesa, no sólo en interés del pueblo de ese Territorio sino también de la paz mundial.

198. Las demostraciones en la Somalia Francesa durante la reciente visita del Presidente de Gaulle demostraron los verdaderos sentimientos de los habitantes. La delegación de Somalia estaba convencida de que esas demostraciones no estaban dirigidas contra la persona de ese gran estadista, sino contra la política imprevista y anacrónica de la administración colonial. A juicio del orador las medidas opresivas e injustas adoptadas por la administración del Territorio en respuesta a esas demostraciones sólo podrán agravar la situación. El Comité Especial tenía el deber de buscar una solución pacífica y constructiva del problema de la Somalia Francesa, y de señalar el camino para que se aplicase debidamente al Territorio la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

199. Añadió que los peticionarios que se presentaron al Comité hicieron una descripción real de la situación en el Territorio. El Gobierno de Somalia celebraba la declaración del Presidente de Gaulle de que en julio de 1967, a más tardar, se celebraría un referéndum en el Territorio; pero la dura política que aplicaba la administración colonial francesa al castigar a la población del Territorio por haber expresado un legítimo deseo de independencia revelaba un criterio muy distinto. Tampoco era posible olvidar que el plebiscito de 1958 no se realizó en la forma debida.

200. El Comité Especial debería tener presente que la Somalia Francesa tiene una población relativamente pequeña. Cuanto menor sea el número de votantes que han de decidir un problema, tanto mayor es el peso de cada voto y más fácil falsificar los resultados. Era indispensable, pues, contar con buenas garantías de que el referéndum se llevaría a cabo debidamente: no se debería privar de su derecho a votar a los ciudadanos *bona fide* del Territorio, no se debería permitir que votaran los que no sean ciudadanos *bona fide* del Territorio, y no debería haber intimidación, coerción ni intervención de influencias indebidas. En el plebiscito de 1958 hubo fallas muy graves en todos esos aspectos. El Gobierno de Somalia no esperaba que Francia repitiera esos errores, pero creía que el Comité Especial debería recomendar medidas que eliminaran, toda duda sobre los tres puntos siguientes: que la población de la Somalia Francesa podrá ejercer su derecho inalienable a la libre determinación en una fecha determinada no posterior a julio de 1967; que antes del referéndum se crearán condiciones que permitan a la población de la Somalia Francesa hacer uso completo de ese derecho, lo que incluirá el derecho a crear las organizaciones políticas de su elección y de pertenecer a ellas, y el derecho de todos los ciudadanos exiliados a regresar al Territorio sin temor de sufrir represalias; y que el propio referéndum se llevará a cabo con absoluta equidad.

201. Dijo que el representante de Etiopía dio a entender que sin el comercio con Etiopía el Territorio no podría mantener una existencia económica independiente. Sin embargo, el problema de la economía del Territorio era independiente de la cuestión de la libre determinación. Las Naciones Unidas establecieron hace

mucho el principio de que una preparación económica inadecuada no debe servir nunca de pretexto para demorar la independencia. Pero como ese punto ha sido constantemente mencionado por Etiopía, el orador creyó necesario exponer la opinión de su delegación al respecto, a fin de colocar en su debida perspectiva los dos principales vínculos comerciales de Etiopía con el Territorio: el ferrocarril y el puerto.

202. Indicó que el ferrocarril franco-etíope se usa exclusivamente para el transporte de las mercancías etíopes que se dirigen al puerto de Djibouti o proceden de él. Considerada dentro del contexto del ingreso nacional del Territorio, la parte que corresponde al ferrocarril en la economía es mucho menor de lo que se cree en general. La población de la Somalia Francesa está constituida en su mayor parte por pueblos nómadas para los cuales el ferrocarril no tiene ninguna importancia y no ha cambiado en nada su nivel de vida ni su forma de existencia. Como se declaró en la explicación oficial dada en el Parlamento francés, el Tratado franco-etíope de 1959 fue resultado de la situación siguiente: a consecuencia de la resolución 390 (V) de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 1950, que volvió a unir Eritrea a Etiopía, Etiopía se halló en posesión de una costa de ochocientos kilómetros y de dos puertos sobre el Mar Rojo. A raíz de la modernización de la carretera de Addis Abeba a Assab y del puerto de Assab, Djibouti y el ferrocarril franco-etíope perdieron el monopolio de que habían disfrutado desde 1909. Como consecuencia, Djibouti y el ferrocarril comenzaron a arrojar un déficit cada vez mayor y Francia no quiso seguir haciéndose cargo de toda la responsabilidad financiera. El propósito principal del Tratado de 1959 fue hacer que Etiopía asumiese una parte igual del déficit. Con anterioridad a 1959, todos los beneficios del ferrocarril habían ido a parar a manos de los accionistas, franceses en su totalidad. Con arreglo al Tratado de 1959 la mitad de las acciones pasaron a Etiopía, que recibía por consiguiente la mitad de los beneficios. Desde el punto de vista de la economía de la Somalia Francesa no hubo, pues, cambio alguno: los beneficios seguían saliendo del Territorio. El punto más significativo en cuanto al ferrocarril no es que sus beneficios están exentos del pago de impuestos locales, ni el hecho de que ningún habitante local sea miembro de su junta de directores, sino la forma en que se ha exagerado su importancia para el Territorio. En el momento de mayor auge, hace 18 años, la fuerza total de trabajo no pasaba de 5.000 personas. En 1965 esa cifra había disminuido a 2.500. Como Djibouti tiene una población de 40.000 habitantes y la fuerza de trabajo de 2.500 personas abarca toda la línea e incluye etíopes y europeos, el ferrocarril no parece ser realmente una importante fuente de empleo.

203. Los beneficios financieros que obtiene la Somalia Francesa del tráfico etíope en el puerto de Djibouti consiste sólo en aranceles de puerto que se cargan a las mercaderías en tránsito. Esos aranceles son un 15% más bajos que los que se cobra en Adén, al otro lado del Golfo. El comercio beneficia más a Etiopía que a la Somalia Francesa, como lo confirma el hecho de que mientras el volumen del comercio en tránsito de Etiopía por el puerto se ha duplicado desde 1959, el aumento correspondiente en el presupuesto del Territorio ha sido insignificante. Etiopía ha estado ampliando rápidamente los puertos de Massawa y Assab y este último empieza a rivalizar con Djibouti.

204. El puerto de Djibouti tiene posibilidades económicas completamente independientes del comercio de tránsito de Etiopía y potencialmente tan lucrativas como las de este último, por lo menos. Como resultado de las mejoras se ha convertido en puerto carbonero cuyo tráfico internacional se ha más que cuadruplicado en los últimos diez años. Se debería prestar mayor atención a otros aspectos del potencial económico del país. El error de creer que el Territorio depende únicamente del ferrocarril y del puerto ha sido causa de que la administración francesa descuidase otras posibilidades de desarrollo como pesca y las industrias de la madreperla, la sal y los cueros. Se deberían estudiar las perspectivas de desarrollo de otras pequeñas industrias con asistencia de las Naciones Unidas, e investigar a fondo los recursos minerales del país. Sería conveniente mantener y aumentar los lazos económicos actuales de la Somalia Francesa con Francia y Etiopía, pero la relación deberá ser de cooperación en beneficio mutuo de ambos países. Se han establecido valiosos vínculos entre los pueblos de Francia y del Territorio y a pesar de las fallas de la administración colonial local existe mucha buena voluntad hacia la Francia metropolitana.

205. Por lo que hacía a Etiopía, la delegación de Somalia estaba segura de que la población de una Somalia Francesa independiente desearía desarrollar sus relaciones económicas con Etiopía y con otros países africanos. Ello estaría de acuerdo con la tendencia actual en Africa hacia la cooperación económica regional, uno de los principales objetivos de la Organización de la Unidad Africana. En los últimos meses Somalia y Etiopía, y otros ocho Estados de Africa oriental, habían constituido una asociación para fomentar la cooperación económica regional.

206. No había razón para que Etiopía se opusiera a las demandas de independencia del pueblo del Territorio, ni para que supusiera que la independencia de la Somalia Francesa constituiría una amenaza para sus intereses económicos. Esos intereses podrían protegerse, por ejemplo, mediante un tratado de garantía u otro instrumento similar aceptable para la población del Territorio.

207. Correspondía subrayar el principio surgido de las deliberaciones del Comité Especial, a saber, que los deseos de independencia libremente expresados por un pueblo jamás deben ser subordinados a los intereses políticos o económicos de la Potencia colonial o de ningún otro Estado. Ese principio fue apoyado por la delegación etíope al Comité Especial durante los debates sobre el porvenir de los territorios no autónomos, y por el representante de Etiopía durante el debate sobre Adén realizado en el decimotercero período de la Asamblea General.

208. Dijo que aunque no había controversia entre su país y Etiopía, ni entre su país y Francia, como somalíes y como vecina de la Somalia Francesa y de Etiopía, la población de Somalia está profundamente inquieta ante la sugerencia de Etiopía de que el derecho de la población de la Somalia Francesa a la libre determinación depende en cierto modo de supuestas reclamaciones históricas de Etiopía sobre dicho Territorio o debe estar limitada por las mismas. Etiopía no tiene tales reclamaciones históricas, y aun si las tuviese no vendrían al caso. Opinó que si se permitiese que la historia pasada se interpusiera en el camino de la libre determinación, la libre determinación resultaría clara-

mente imposible; sería desastroso para la paz mundial que cualquier país, basándose en viejos mapas o en acontecimientos históricos, pudiese reclamar el derecho a desmembrar o anexarse otros países.

209. No resultaba claro en qué época de la historia el Territorio había estado bajo el control de Etiopía pero no fue indudablemente en tiempos bíblicos ni en la época medieval, cuando la meseta montañosa de Etiopía estaba rodeada y aislada por las fuerzas del Islam. En el siglo VII se estableció en Zeila una sultanía árabe que en el siglo XIII llegó a ser el poderoso Imperio de Adel. La enemistad tradicional entre el pueblo de la meseta y el pueblo de la costa culminó en el siglo XVI con un ataque de los somalíes y los afares, ayudados por los turcos, contra Etiopía. Sólo cuarenta años más tarde fueron rechazados con ayuda de armas y soldados portugueses. A partir de entonces se mantuvo un inestable equilibrio de poder con los gobernantes de la costa, hasta que entraron en escena las naciones europeas en la segunda mitad del siglo XIX.

210. Los pueblos de la costa y los de la meseta se desarrollaron en sentidos diferentes en todos los aspectos: diferencias de religión, idioma, costumbres y clima, y políticamente nada pudo haber sido más distinto que las monarquías autocráticas de Etiopía y las sultanías de la costa, cuyos jefes eran simplemente *primus inter pares*. Toda la historia de la región es la historia del choque entre dos culturas diferentes que, no obstante algunas ventajas temporarias, nunca pudieron establecer un control permanente de una sobre la otra.

211. Hasta aproximadamente 1880 es justo considerar, a grandes rasgos, que la zona de unas cien millas alrededor de Addis Abeba constituía el límite meridional del poderío etíope. Cuando en el decenio de 1860 los franceses llegaron a la costa de lo que hoy es la Somalia Francesa, el Territorio estaba constituido por un conglomerado de tierras de jefes y de sultanías de precaria independencia, sobre las cuales el Imperio Otomano había ejercido un dominio nominal por conducto de su representante egipcio. Dicho dominio era tan leve que las Potencias europeas pudieron establecer en la región protectorados apenas velados. Sin embargo, ninguna de las sultanías o de las tierras de jefes estuvo bajo el dominio directo o indirecto de Etiopía, llamada entonces el Reino de Choa, que consideraba enemigos suyos a los musulmanes que vivían cerca de sus fronteras. Entre 1862 y 1890 Francia concluyó una serie de tratados con los jefes y los sultanes mediante los cuales obtuvo el control, no sólo de la franja costanera de la Somalia Francesa actual, sino también de vastas zonas del interior.

212. Durante ese período Menelik ascendió al trono de Etiopía y logró unir a los principales principados amhárlicos. Con la ayuda de varios países europeos extendió su imperio hacia el sur por medio de la conquista militar, no sobre la base de reclamaciones históricas sino simplemente en interés de su expansión territorial. Como dijo Arnold Toynbee, los amhárlicos fueron el único pueblo africano que se sumó en la arrebatación por Africa, y hoy aproximadamente la mitad de la población de la Etiopía ampliada no es de nacionalidad amhárlica ni de religión cristiana. Lo que permitió a Menelik afianzar su control sobre las zonas bajas fue la adquisición de Harar. En el decenio de 1890, por primera vez en su historia, partes de la población danakil y somalí quedaron bajo el dominio etíope. En aquel entonces Gran Bretaña y Francia tenían

el mayor interés en lograr la cooperación de Menelik contra los derviches y, como resultado de los tratados concluidos en 1897 con esos dos países, Etiopía adquirió nuevos territorios afares y somalíes. No se había tratado de la restitución de territorios perdidos; en aquel entonces Etiopía no había pretendido una soberanía anterior sobre las tierras ocupadas por los franceses, aunque aproximadamente en la misma época Menelik hizo otras reclamaciones sobre territorios situados tan al norte como Khartoum y el Lago Nyanza.

213. Después de 1897 las fronteras de la Somalia Francesa se mantuvieron invariables hasta 1954, cuando Francia, pese a las enconadas protestas del delegado de Somalia en el Parlamento francés, cedió a Etiopía otra parte del territorio. El tratado del ferrocarril franco-etíope de 1959 concedió también a Etiopía ciertos derechos en la Somalia Francesa que afectaron considerablemente a los habitantes del Territorio, pero el tratado excluía específicamente los derechos de extraterritorialidad en el puerto de Djibouti. Pese a ello, si el pueblo de la Somalia Francesa alcanza la independencia, no hay duda de que podrán hacerse, y se harán, arreglos para proteger los intereses legítimos de Etiopía.

214. Dijo que Somalia no culpaba a Etiopía por su política pasada, pero la era de la expansión territorial había terminado para siempre. No podían hacerse pues reclamaciones basadas en anexiones precedentes. En otras épocas hubo anexiones y cesiones de territorio, y se establecieron protectorados y esferas de interés que pasaban totalmente por alto los deseos y el bienestar de los pueblos interesados.

215. La sugerencia de que cualquier supuesta reclamación histórica de otro país podría imponer condiciones al derecho de la población de la Somalia Francesa a la libre determinación, y hasta anularlo, era opuesta a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de la Unidad Africana y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

216. El representante de Etiopía declaró que, habida cuenta de la declaración del Presidente en el sentido de que el examen del fondo de la cuestión del Territorio no estaba en el programa de la sesión, su delegación se reservaría el derecho de hacer uso de la palabra cuando la Cuarta Comisión examinara este tema en el vigésimo primer período de sesiones.

217. Añadió que su país había sido acusado por el representante de Somalia de querer anexarse el Territorio de Djibouti, lo que era una ironía.

218. Repitió que la posición de su delegación se basaba en hechos perfectamente conocidos relativos a la interdependencia de Djibouti y Etiopía, y que su delegación creía que la población autóctona del Territorio tenía derecho de ejercer su legítimo derecho a la libre determinación sin injerencias del exterior.

D. DECISIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ESPECIAL

219. En su 471a. sesión, celebrada el 10 de octubre de 1966, el Comité Especial, al aprobar la recomendación contenida en el párrafo 3 del 25º informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.338), decidió transmitir a la Asamblea General la información que figura en el documento de trabajo pertinente preparado por la Secretaría, junto con las declaraciones hechas sobre este tema por representantes y por peticionarios. Tam-

bién decidió informar a la Asamblea que, sin perjuicio de la decisión que la Asamblea pudiera adoptar en su vigésimo primer período de sesiones, estudiaría la Somalia Francesa en sus reuniones de 1967.

ANEXOS

ANEXO I

[A/AC.109/L.288]

Carta, de fecha 23 de marzo de 1959, dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia^a

1. De conformidad con la declaración contenida en el Capítulo XI de la Carta, el Gobierno de Francia ha proporcionado con regularidad todos los años, de 1946 a 1957, la información prevista en el Artículo 73. En cada una de esas ocasiones señaló que, según la Carta, corresponde al Estado administrador determinar cuáles son los territorios cuyos habitantes todavía no administran completamente sus propios asuntos.

2. Por ello, a medida que los territorios han evolucionado, el Gobierno de Francia, según lo notificó a la Secretaría, ha suspendido sucesivamente la transmisión de información sobre los siguientes territorios, por haber llegado a la etapa requerida del desarrollo: en 1947 sobre Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Nueva Caledonia, Establecimientos franceses de Oceanía y San Pedro y Miquelón, en 1948 sobre los Estados Asociados de Indochina y los Establecimientos franceses de la India y en 1956 sobre Túnez y Marruecos.

3. Se siguió transmitiendo la información relativa al África Occidental Francesa, al África Ecuatorial Francesa, Madagascar, las Gomoras, la Somalia Francesa y las Nuevas Hébridas.

4. Salvo por lo que a estas últimas se refiere, debido a la situación especial de condominio, el Gobierno de Francia decidió suspender la transmisión de información a partir de 1957. La Ley Básica (*Loi-cadre*) del 23 de junio de 1956 y los decretos de aplicación de la misma han permitido promover una serie de reformas cuyo resultado ha sido dotar de autonomía interna a estos territorios. Con el establecimiento de la Comunidad en 1958, quedaron reforzadas dicha autonomía y el sentido liberal del proceso evolutivo señalado por la promulgación de la Ley Básica.

5. Se adjuntan a la presente los textos relativos a la situación jurídica de los diversos territorios sobre los que ha dejado de enviarse información^b.

ANEXO II

[A/AC.109/121]

Memorando, de fecha 25 de mayo de 1965, dirigido al Comité Especial por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Somalí

I. HISTORIA DE LA DOMINACIÓN FRANCESA

1. En 1862, en la época en que los intereses británicos e italianos en el Cuerno de África se desarrollaban rápidamente, los franceses resolvieron que ellos también debían establecerse en el África oriental, y en virtud de un tratado con el jefe de los danakiles, compraron por 50.500 francos el puerto de Obok y la llanura contigua. En 1880, los franceses publicaron un aviso en el que definían los límites de las posesiones francesas, pero en 1884 el Sultán de Tadjoura concertó un tratado de protección con Francia y en 1885 se concluyeron tratados análogos con el jefe de los somalíes issas

^a Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto período de sesiones, Anexos, tema 36 del programa, documento A/4096, párr. 3.

^b *Ibid.*, documento A/4096/Add.1.

y el Sultán de Gobad, ampliando dichas posesiones. La extensión de estos protectorados franceses fue fijada más tarde en tratados concluidos con la Gran Bretaña en 1888 y con Etiopía en 1897, y confirmada en el tratado tripartito concluido en 1906 entre Francia, Italia y la Gran Bretaña.

2. Así, siguiendo la práctica corriente de la "arrebatiña por África", se impusieron tratados desiguales sobre los pueblos de esas regiones, se creó un "protectorado" francés y se negociaron fronteras precisas entre los cuatro Estados — Francia, Gran Bretaña, Italia y Etiopía — que competían por territorios que no pertenecían a ninguno de ellos. Tales son los orígenes poco ilustres de la actual dominación francesa.

II. ACTUAL CONDICIÓN CONSTITUCIONAL DEL TERRITORIO

3. La Somalia Francesa es actualmente un "territorio ultramarino dentro de la Comunidad Francesa".

4. Antes de la constitución francesa de 1958, los territorios ultramarinos eran las antiguas colonias que no habían sido asimiladas y que, por lo tanto, tenían una condición muy diferente de la de Francia. La "ley fundamental" del 23 de junio de 1956 dio a esos territorios cierta autonomía, y la Constitución de 1958 les permitía optar entre dos posibilidades: conservar su condición jurídica y convertirse en un departamento de ultramar o llegar a ser un Estado miembro de la Comunidad. La Somalia Francesa optó por retener su condición jurídica, de suerte que ésta en general sigue en la misma condición que tenía con arreglo a la ley del 23 de junio de 1956^a.

5. Sin embargo, la autonomía del Territorio está rigurosamente limitada; un escritor francés la ha descrito del modo siguiente:

"Pero la competencia de los órganos territoriales autónomos (Asamblea Territorial y Consejo de Gobierno) sólo alcanza a los servicios territoriales. La ley del 23 de junio de 1956 establece una distinción fundamental entre los servicios territoriales y los servicios públicos del Estado. La lista de estos últimos es bastante larga y fue ampliada en virtud de la ley de 1956 para contrarrestar la autonomía concedida en la gestión de los servicios territoriales. Los servicios del Estado son: las relaciones exteriores, la defensa nacional, el poder judicial, la inspección del trabajo, los servicios encargados de proteger la seguridad pública y asegurar el respeto a la libertad de los ciudadanos, las comunicaciones exteriores (servicios aéreos, radiodifusión), el tesoro, el crédito y el cambio de divisas, la enseñanza superior, las sociedades económicas mixtas"^b.

6. Por lo tanto, la condición del Territorio sigue siendo esencialmente igual a la de una colonia británica a la que se ha concedido facultades limitadas de gobierno propio: es evidente que todas las cuestiones de relaciones exteriores, la defensa y muchas cuestiones estrictamente "internas" se hallan por completo bajo el control de Francia y no de las instituciones políticas del Territorio. Se trata, en resumen, de un territorio "no autónomo".

7. Se recordará que cuando el Presidente del Comité Especial de los Veinticuatro escribió al Representante Permanente de Francia, el 30 de marzo de 1964, pidiéndole información sobre los territorios bajo administración francesa a los cuales se aplica la resolución 1514 (XV) aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960, la respuesta francesa, de fecha 24 de junio de 1964, fue la siguiente:

"Dicha comunicación se refiere evidentemente a las Nuevas Hébridas bajo condominio anglo-francés, único territorio respecto del cual Francia está obligada todavía por las disposiciones de la Carta relativas a los territorios no autónomos." (A/AC.109/71/Add.4.)

^a Whiteman, *Digest of International Law*, vol. 1, págs. 545 y 546.

^b Duverger, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 1959, págs. 699 a 702 (traducción).

8. El gobierno somalí rechaza este punto de vista. La Somalia Francesa está sin duda alguna comprendida en la resolución de la Asamblea General, y por ello fue que el Gobierno de Somalia pidió que se incluyera la cuestión de la Somalia Francesa en el programa del Comité Especial de los Veinticuatro. El Gobierno somalí encarece al Comité que utilice todos los recursos de que dispone a fin de lograr para este Territorio el derecho a la libre determinación.

III. ESTRUCTURA POLÍTICA DEL TERRITORIO

A. Organos políticos del Territorio

9. Estos son los siguientes:

i) Gobernador, Jefe del Territorio y Presidente del Consejo de Gobierno: un francés nombrado por el Presidente de Gaulle.

ii) Consejo de Gobierno: ocho ministros elegidos por la Asamblea Territorial conforme a un sistema de representación proporcional (4 afares, 3 issas, 1 metropolitano). El Consejo se reúne bajo la presidencia del Gobernador, quien representa al Presidente de la República Francesa. Sus poderes se limitan a los asuntos comprendidos por la autonomía concedida en virtud de la ley fundamental de 1956.

iii) Asamblea Territorial: 32 miembros elegidos por sufragio "universal" (16 afares, 11 somalíes, 4 metropolitanos, 1 árabe).

iv) Comisión Permanente: se reúne en el intervalo entre los dos períodos de la Asamblea y trata de cuestiones comprendidas por los poderes que le delega la Asamblea. Además, el Territorio está representado en el Parlamento francés por un diputado y un senador. Es preciso mencionar aquí el evidente predominio de los afares en estos órganos. Su partido es el más favorecido por Francia y por medio de él es que el Gobierno francés fija los límites de los siete distritos electorales, los cuales son definidos de manera que quede asegurada la preponderancia de los afares. El diario francés *Le Monde*, en su edición del 22 de abril de 1964, dijo lo siguiente en relación con dirigentes afares:

"Es verdad que su movimiento se beneficia del apoyo cuasi oficial de las autoridades administrativas y que los nuevos distritos electorales, hábilmente trazados antes de las elecciones territoriales de noviembre de 1963, han asegurado en gran parte el ingreso de los candidatos afares en la Asamblea y en el Gobierno."

B. Partidos políticos del Territorio

10. Los tres partidos principales son la Union démocratique Afar, que como se ha mencionado anteriormente goza del apoyo semioficial, la Unión démocratique Issa y el Mouvement populaire. Francia apoya la Unión démocratique Afar porque este partido, tal como está dirigido, es partidario de mantener el *statu quo*. De los partidos de la oposición, el Mouvement populaire es el más radical y trabaja activamente por lograr la independencia de Francia. Su Secretario General, el Sr. Ob-sieh Beuh, elegido en agosto de 1964, poco antes de su elección salió de la cárcel en la que estuvo durante un año cumpliendo una condena por actos subversivos, por haber abogado a favor de la liberación del Territorio.

11. Las autoridades francesas se oponen a todo intento por formar un partido nacionalista que supere las divisiones tribales: por el contrario, están a favor de la diversidad de partidos basados en diferencias tribales y tratan de promover el desacuerdo entre los afares y los somalíes issas. Como lo ha dicho el diario *Le Monde*, "La Administración considera — con bastante razón — que estas rivalidades constituyen cierta garantía de estabilidad" (22 de abril de 1964).

12. Este principio será reconocido indudablemente por todos los miembros del Comité Especial de los Veinticuatro como el viejo principio colonialista de "dividir para gobernar". En

efecto, los afares (o danakiles), y los somalíes — de los cuales los somalíes issas son sólo una parte — tienen fundamentalmente mucho en común. Practican una religión común, la musulmana, tienen una cultura común y se casan entre ellos. No tienen dificultades de comunicarse por motivos de idioma, con excepción de los danakiles, en el extremo norte, que han sido introducidos recientemente en el Territorio. Son los franceses y etíopes los que tratan de crear diferencias y animosidad entre los afares y los somalíes y de introducir más afares al mismo tiempo que expulsan a millares de somalíes.

Razas	Djibouti	Ali Sabieh	Dikhil	Tadjoura	Total
Danakiles (afares)	2.240	—	7.760	20.560	30.560
Somalíes (issas)	14.950	6.000	3.000	—	23.950
Arabes	3.000	—	—	—	3.000
Extranjeros	16.000	140	270	200	16.610
TOTAL	36.190	6.140	11.030	20.760	74.120

14. En estas cifras no se incluye a millares de somalíes que, por falta de documentos de identidad, son considerados como "extranjeros". Huelga hacer comentarios sobre lo absurdo de que se conceda el voto a un francés en cuanto desembarca en Djibouti y se le niegue a los somalíes cuyos antepasados nacieron allí. Así pues, puede verse que los somalíes son más numerosos en Djibouti propiamente dicho y en las regiones del sur, contiguas a la República Somalí, mientras que los danakiles (o afares) predominan en las regiones contiguas a Etiopía en el oeste y a Eritrea en el norte.

15. Cabe preguntarse cómo, con el sufragio universal, puede haber una representación tan totalmente desproporcionada. Hay varios motivos:

a) Se concede también el derecho de voto a la población francesa no indígena que, en Djibouti solamente, asciende a casi 6.000 personas.

b) Se concede también el derecho de voto a los miembros del ejército francés destacados en el Territorio, cuyo número asciende a 5.000 hombres.

c) Se niega el derecho de voto a miles de somalíes con el pretexto de que son "extranjeros", no nacidos en el Territorio. En estas regiones del mundo muy rara vez disponen las personas de pruebas documentales del lugar de su nacimiento, por lo que resulta casi imposible a los somalíes refutar esta afirmación. Cuando logran presentar pruebas por escrito, las autoridades francesas suelen rechazarlas como falsificaciones y las rompen.

d) Las autoridades francesas, siempre con el pretexto de que los somalíes son "extranjeros", aplican una política persistente y deliberada de expulsión de somalíes. Se calcula que han sido expulsados de esta manera de 12.000 a 18.000 somalíes.

e) La redistribución de los asientos resultante de la reforma electoral de 1963 estaba destinada especialmente a reducir la representación somalí.

f) Los franceses no vacilan en recurrir a la coacción, a la amenaza de privar de empleo a los somalíes y al soborno puro y simple. Esto es lo que significa la frase "la administración hace las elecciones".

16. Por todas estas razones el Gobierno somalí insta al Comité Especial de los Veinticuatro a que ejerza presión sobre Francia para lograr que las elecciones, y la expresión de opiniones por los representantes elegidos, puedan ser libres y justas. Tal como están las cosas, el Gobierno somalí estima que las opiniones expresadas en el Consejo de Gobierno o en la Asamblea Territorial no pueden considerarse como la expresión del parecer del pueblo del Territorio. Podría haber libre expresión sólo si se eliminara toda presión por parte de Francia y de Etiopía, de preferencia mediante un plebiscito efectuado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Es preciso que esto se haga pronto, pues las técnicas francesas de co-

C. Sistema electoral

13. El sistema electoral se basa aparentemente en el sufragio universal. La población total asciende a 80.000 habitantes aproximadamente, habiendo aumentado constantemente desde 1948, cuando era sólo de 41.000 habitantes. Según un estudio francés publicado en 1961^c, las cifras de la población indígena en las cuatro regiones principales eran las siguientes:

^c "La Côte française des Somalis", *Notes et études documentaires*, No. 2774 (abril de 1961).

acción perfeccionadas en Argelia se emplean ahora contra los somalíes. El frente de liberación, el FLCS, pidió en junio de 1963 a las Naciones Unidas que investigara los campos de concentración establecidos en Obock, Tadjoura, Dikhil y Lago Assal. En octubre de 1964, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Arabes dirigió un llamamiento al Comité de Libertad Sindical de la OIT para que investigara "las atrocidades cometidas por las autoridades francesas imperialistas contra el movimiento sindical y los trabajadores en la costa francesa de los somalíes. El FLCS se dirigió en enero de 1965 al Comité de Refugiados de la Organización de la Unidad Africana (OUA) pidiéndole ayuda para millares de refugiados somalíes que huían de la persecución francesa. Según cálculos recientes, hay 6.850 refugiados "registrados", es decir, que se han registrado oficialmente para recibir ayuda (sin incluir los que han buscado refugio con sus propias familias, etc.); se calcula que el número de refugiados no registrados es casi dos veces mayor.

IV. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TERRITORIO

17. La superficie total del Territorio es de sólo 5.800 millas cuadradas, o sea, 23.000 kilómetros cuadrados, de los cuales se cultivan a lo sumo 3.000 hectáreas, casi el 90% de la superficie se compone de tierras desérticas y el 10% restante se deja a los afares y somalíes nómadas con sus rebaños de vacas, ovejas, cabras y camellos. El Territorio produce únicamente cueros, semillas oleaginosas, almizcle, perlas, pescado, café en poca cantidad, cereales y sal.

18. Así, pues, la economía actual del Territorio depende de dos cosas: del ejército francés y del puerto de Djibouti. El presupuesto del Territorio ha aumentado poco: las cifras oficiales francesas muestran un aumento de 1.074 millones de francos de Djibouti en 1959 a 1.095 millones en 1961^d. En 1961, el presupuesto del ejército francés en el Territorio ascendía a 1.866 millones de francos de Djibouti, cifra superior a la del presupuesto de todo el Territorio. El Territorio sufre un déficit creciente en su balanza de pagos, dicho déficit aumentó de 1.474 millones de francos de Djibouti en 1959 a 1.970 millones en 1961^e. Tampoco hay indicio alguno de que las autoridades francesas estén dispuestas a desarrollar la capacidad económica del Territorio a fin de disminuir su dependencia del ejército de ocupación.

19. Este déficit creciente de la balanza de pagos contrasta notablemente con el volumen creciente de mercancías en trán-

^d "La Côte française des Somalis", *op. cit.*, pág. 39. Un franco de Djibouti equivale a 0,023; un dólar equivale a 214,39 francos de Djibouti.

^e Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, *Comptes économiques de la Côte française des Somalis, 1959-1961*, págs. 23 a 29.

sito por el puerto de Djibouti. El tonelaje de las mercancías en tránsito destinadas a Etiopía se elevó de 151.000 toneladas en 1938 a 1.140.000 toneladas en 1959, y se ha duplicado nuevamente después de esa fecha¹. Este comercio de tránsito ciertamente crea empleo en Djibouti, pero es evidente que ni Francia ni Etiopía tienen la intención de permitir que se apliquen derechos de importación o de tránsito cuyo producto ingrese directamente en el presupuesto del Territorio.

20. El puerto de Djibouti está vinculado con Addis Abeba por un ferrocarril. Construido en 1917, este ferrocarril quedó en 1959 bajo el control mixto franco-etíope y su oficina principal se trasladó de París a Addis Abeba. Recientemente, Francia concedió a Etiopía un crédito de 55 millones de francos franceses para financiar la construcción de una línea ferroviaria a Sidamo. Es en estos lazos económicos entre Etiopía y Francia que Etiopía funda su política actual con respecto al Territorio. En pocas palabras, está encaminada a permitir que el *statu quo* muy beneficioso (para Etiopía) se mantenga.

21. El Institut national de la statistique et des études économiques de Francia ha resumido la situación en los términos siguientes:

"El presente análisis pone de relieve el carácter artificial de la economía de la Costa Francesa de los Somalíes, que está condicionada en gran parte por los efectivos militares destacados en el Territorio y que, por lo demás, depende estrechamente de la actividad del puerto ferroviario. Por tanto, el control de la vida económica parece estar totalmente en poder de centros de decisión situados fuera del Territorio."²

V. SISTEMA EDUCACIONAL Y SOCIAL DEL TERRITORIO

22. La información que figura a continuación es sólo de carácter básico. Las cifras oficiales francesas sobre la educación correspondientes a 1963³ son las siguientes:

Escuelas	Públicas	Privadas	Alumnos
Primer grado (elemental)	13	6	3.445
Segundo grado (secundaria) ..	2	3	353
Técnicas	2	3	231

23. En el *UNESCO Statistical Yearbook* (Anuario estadístico de la UNESCO) correspondiente al mismo año no se da ninguna cifra que coincida con las cifras arriba indicadas, y no figura ningún dato sobre el Territorio en los cuadros referentes a la enseñanza obligatoria, al analfabetismo o a las bibliotecas. Pero sí se indica que, en 1960, el total destinado a los gastos ordinarios de enseñanza era de 89.000.000 de francos de Djibouti (aproximadamente 400.000 dólares) y que el importe de los gastos de capital era cero. El total general de unos 4.000 alumnos a quienes se instruye en una población de 80.000 habitantes no impresiona a nadie y la falta de servicios de enseñanza superior es asombrosa. Además, debe recordarse que estas cifras son principalmente cifras que muestran el número de niños franceses y de otros niños extranjeros que asisten a la escuela. Las autoridades francesas no están dispuestas a ofrecer importantes servicios de enseñanza a la población indígena, particularmente a los somalíes.

24. En el plano social más general, hay un hospital grande (pero los servicios médicos no son gratuitos); no hay teatro permanente y la prensa diaria (*Le Réveil de Djibouti*) está controlada por el Gobierno. No es política de las autoridades francesas promover la integración social o la comprensión entre los afares y los somalíes y menos todavía entre éstos y los residentes franceses.

¹ *The London Financial Times*, 4 de septiembre de 1964.

² *Loc. cit.*, pág. 7.

³ Véase *Europe-France outre mer*, No. 409 (marzo de 1964), pág. 34.

VI. INTENCIONES DE FRANCIA RESPECTO DEL TERRITORIO

25. Estas intenciones son claras. Los franceses se proponen permanecer en el Territorio y rechazar todo intento de parte de la OUA o de las Naciones Unidas por lograr la liberación del Territorio de conformidad con el derecho a la libre determinación de los pueblos del Territorio.

26. En septiembre de 1964 y en enero de 1965, las autoridades francesas se negaron a permitir la entrada en el Territorio de una misión investigadora de la OUA.

27. *Le Figaro* informó el 22 de marzo que el Sr. Messmer, al pasar revista a un desfile militar de tropas francesas en Djibouti, había declarado que "Francia poseía toda la potencia militar necesaria para rechazar todo ataque, cualquiera que fuese su origen, y permanecería en el país todo el tiempo que quisiera".

28. *Le Monde* informó el 24 de marzo que el Sr. Messmer había ido a Addis Abeba por invitación del Emperador y que había conversado con Haile Selassie. Se informó que, al terminar su conversación, el Sr. Messmer había puesto en conocimiento del Emperador Haile Selassie que Francia había decidido permanecer en Djibouti y que con ese fin había reforzado su potencial militar; el soberano no había formulado objeciones y su entrevista había continuado cordialmente.

29. Los franceses utilizarán todos los métodos imaginables para fomentar la rivalidad entre Etiopía y la República Somalí, entre los afares y los somalíes dentro del Territorio, y para alarmar a los residentes extranjeros respecto de lo que acaecerá si Francia se retira, con objeto de prolongar su dominación colonialista y opresiva. Francia no vacilará en recurrir a la expulsión, al encarcelamiento y a la brutalidad en toda forma para aplastar en el Territorio a los elementos disidentes.

VII. INTENCIONES DE ETIOPÍA RESPECTO DEL TERRITORIO

30. El Gobierno somalí mira con suspicacia extrema las intenciones etíopes. Etiopía es miembro del Comité Especial de los Veinticuatro y del Comité de los Nueve de la OUA; sin embargo, por lo que hace a la Somalia Francesa, es evidente que Etiopía no desea apoyar la liberación de ese Territorio. Le interesa únicamente mantener el *statu quo*, conservando el lucrativo tránsito libre por Djibouti y la ayuda económica de Francia. Sobre todo, Etiopía está decidida a impedir que la Somalia Francesa vuelva a los pueblos somalíes.

31. El 21 de diciembre de 1963, la AFP informó que el Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía había dicho lo siguiente:

"No podemos permitir ninguna tentativa de Somalia por obtener posesión de Djibouti, pues este puerto y su ferrocarril son los pulmones mismos de Etiopía. Toda tentativa de Somalia en ese sentido será considerada por nosotros como una causa de guerra. El buen sentido exige el mantenimiento del *statu quo* en Djibouti."

32. En marzo de 1964, en una entrevista con el diario *Le Figaro* de París, el Embajador de Etiopía dijo: "Los franceses son nuestros amigos. Queremos que permanezcan en Djibouti..." Parece que, durante la reciente visita del Ministro de Defensa de Francia a Addis Abeba en marzo de 1965, el Emperador dio las mismas seguridades.

33. Sin embargo, el doble juego de Etiopía se ve claramente en el seno de la OUA. Después de la visita de la Comisión Investigadora de la OUA a Etiopía en enero de 1965, los diarios¹ de ese país estaban llenos de declaraciones en el sentido de que Djibouti era etíope.

34. En efecto el Gobierno etíope organizó cuidadosamente el 20 de enero una "manifestación" en el aeropuerto de Dire Dawa, en la que una muchedumbre que decía proceder de la Somalia Francesa clamoreaba: "Djibouti es Etiopía". Como se dará cuenta indudablemente el Comité Especial de los Veinti-

¹ Véanse *Ethiopian Herald*, de 22 y 23 de enero de 1965, y *Voice of Ethiopia*, de 22 de enero.

cuatro, las autoridades etíopes tomaron buenas precauciones para impedir que ningún somalí saliera de la Somalia Francesa para entrevistarse con la Misión Investigadora de la OUA cuando ésta se encontraba en territorio etíope.

35. Fue durante esa misma visita cuando se organizó en Dire Dawa un nuevo "frente de liberación" con el nombre de Movimiento de Liberación de Djibouti. Fue creado en la víspera de la llegada de la Misión Investigadora de la OUA a Dire Dawa; fue una creación del Gobierno etíope de la que nadie había oído nada antes. Es de esperar que esta manobra un tanto ingenua no haya impresionado ni a la Misión de la OUA ni al Comité Especial de los Veinticuatro.

36. El Gobierno somalí no ve con desaprobación el interés de proteger sus intereses económicos en Djibouti y el ferrocarril; no servirá de nada a nadie el cortar esta salida de Etiopía. Sin embargo, a menos que el pueblo desee que Etiopía asuma la soberanía sobre el Territorio (y el Gobierno somalí está convencido de que no lo desea), no hay motivo para que no se garanticen estos intereses económicos, en condiciones justas, mediante un tratado negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y, en cierto sentido, garantizado por las Naciones Unidas. La República Somalí ciertamente estaría dispuesta a aceptar una solución de esta índole.

VIII. INTENCIONES DE LA REPÚBLICA SOMALÍ RESPECTO DEL TERRITORIO

37. Las intenciones de la República Somalí son la reintegración de todo el Territorio habitado por pueblos somalíes en una sola nación y en un solo Estado, la República Somalí, fundándose en el derecho a la libre determinación del pueblo del Territorio.

38. Sin embargo, la República Somalí cree firmemente que es necesario garantizar la libre y auténtica expresión de la opinión del pueblo del Territorio. Por lo tanto, será menester que las Naciones Unidas garanticen este derecho mediante un plebiscito, realizado por la Organización en el Territorio, y libre de toda presión extraña, sea cual fuere.

39. La República Somalí, teniendo en cuenta el precedente de la Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas sobre el Irán Occidental, estima indispensable que se establezca una administración de las Naciones Unidas en el Territorio durante cierto tiempo después del retiro de Francia, a fin de que los habitantes puedan organizar partidos políticos, examinar sus ideas libremente y celebrar negociaciones entre ellos sin temor a la opresión. Esto nunca ha sido posible bajo la dominación francesa y el pueblo del Territorio necesitará este breve tiempo para dar una expresión auténtica a sus deseos políticos. Un plebiscito efectuado inmediatamente después de la independencia producirá sólo una opinión sumamente artificial que reflejará los hábitos de la corrupción y de soborno inculcados por Francia y por otros países extranjeros. Por ellos es que la República Somalí considera indispensable que las Naciones Unidas garanticen al pueblo del Territorio completa libertad de toda presión externa.

40. Por lo tanto, en nombre de los pueblos oprimidos de la Somalia Francesa, que se hallan bajo la dominación colonial francesa en denegación notoria de su derecho a la libre determinación y de la resolución 1514 (XV) aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960, el Gobierno somalí desea instar a que se adopten urgentemente las medidas que se enumeran a continuación:

- 1) Las Naciones Unidas deben afirmar que la Somalia Francesa es un territorio no autónomo al que se aplica la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960.
- 2) Las Naciones Unidas deben afirmar el derecho del pueblo de la Somalia Francesa a la libre determinación, conforme a sus deseos libremente expresados.
- 3) Las Naciones Unidas deben pedir a Francia que conceda la independencia inmediatamente al Territorio, conforme al espíritu de la resolución de la Asamblea General y

de la Carta de las Naciones Unidas, y que retire sus fuerzas armadas, sus funcionarios y demás instrumentos de control sobre el pueblo de la Somalia Francesa.

- 4) Las Naciones Unidas deben pedir a todos los demás Estados que se abstengan de ejercer toda forma de presión directa e indirecta encaminada a tergiversar la libre expresión del derecho del pueblo a la libre determinación.
- 5) Las Naciones Unidas deben, inmediatamente después de que se conceda la independencia al Territorio, asumir la administración de éste durante un período de dos años, a fin de permitir la formación de un consenso político dentro del Territorio respecto de su porvenir.
- 6) Durante el período de su administración, las Naciones Unidas deben permitir el retorno al Territorio de todas las personas que, en los diez últimos años, hayan sido expulsadas o desterradas del Territorio por los franceses, con sujeción a una comprobación adecuada por las Naciones Unidas de su vinculación auténtica con el Territorio.

ANEXO III

[A/AC.109/122]

Memorando, de fecha 8 de junio de 1965, dirigido al Comité Especial por la Misión Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas

1. En el Comité Especial de los Veinticuatro, que tan representativo es por su composición, hemos sentido siempre un íntimo orgullo ante el espíritu abnegado de que constantemente han dado prueba sus miembros en el cumplimiento de su sagrado mandato. Cualesquiera que fuesen la distancia, la magnitud o el grado de progreso de los Territorios examinados, creemos que ninguno de nosotros ha escatimado esfuerzos en el ejercicio de sus funciones, en las que hemos puesto el mismo empeño que si se hubiera tratado, para cada uno de nosotros, de defender los intereses vitales de la propia nación. Esto, desde luego, es natural y estimamos que en ello estriba la verdadera importancia de nuestra tarea.

2. Sin embargo, también sucede en algunas ocasiones que uno o varios miembros de este Comité tienen que demostrar mayor iniciativa y firmeza en las deliberaciones sobre un territorio determinado, lo cual no se debe a la falta de interés de los demás miembros sino a que, por los azares de la historia, de los accidentes debidos a su proximidad geográfica y de otros varios vínculos creados en el curso de la historia, algunos países vecinos están tan íntimamente interesados en la cuestión que sienten una responsabilidad aún mayor para encontrar soluciones rápidas y justas para los problemas de que se ocupa este Comité. El Territorio de Djibouti es uno de esos territorios y tiene, en consecuencia, particular importancia para nuestro país.

3. La delegación de Etiopía estima que es bastante importante determinar, desde un principio, la cuestión del nombre del Territorio que se está examinando. Nos parece innecesario recordar a los miembros del Comité que uno de los instrumentos más eficaces para el desmembramiento de muchos países durante el apogeo del colonialismo europeo fue precisamente la invención de nuevos nombres para denominar entidades territoriales artificialmente creadas. Así fue como se acuñó el término "Somalia Francesa" que se perpetuó después para designar un Territorio que nosotros, en Etiopía, denominamos más apropiadamente Djibouti. En lo que se refiere a la delegación de Etiopía, el presente debate atañe solamente al Territorio de Djibouti. Una vez aclarado este punto importante, no nos queda sino analizar el fondo del asunto.

4. El Territorio de Djibouti, que tiene una superficie de unos 23.000 kilómetros cuadrados y se encuentra en la región oriental de Etiopía, limita al este con la costa occidental del Mar Rojo y al oeste y al norte con Etiopía. Al sudeste, una pequeña frontera le separa de la República de Somalia. De

un total de unos 500 kilómetros de fronteras, 400 kilómetros al menos constituyen la frontera entre Etiopía y Djibouti. Desde el punto de vista físico, Djibouti forma parte del gran valle del Rift, que se extiende desde el Mar Rojo, atraviesa Etiopía y llega hasta Tanzania. El valle del Rift forma una unidad física. Djibouti mismo se encuentra en un extremo del valle de Awash. Debido a la escasísima lluvia, Djibouti es una tierra muy árida, lo cual impide que prospere la agricultura o cultivo alguno. Su clima es uno de los más cálidos del mundo. Para completar la descripción física y demográfica del Territorio, basta añadir que la población total de Djibouti no llega a 80.000 habitantes, la mitad de los cuales residen en la ciudad principal que lleva el mismo nombre que el Territorio.

5. La historia atestigua que durante varios milenios toda la región llamada el Cuerno de África formaba parte de Etiopía y estaba dentro de la jurisdicción de ésta. Tanto las tribus que vivían en las zonas costeras de Djibouti como las otras tribus de las vastas regiones del interior estaban bajo la soberanía etíope, reconocían los derechos soberanos de Etiopía sobre Djibouti y regularmente pagaban tributo a la Corona etíope. Es innegable también que hace poco más o menos un siglo, varios puertos estratégicos y comerciales de las costas del Mar Rojo y del Océano Índico eran puertos etíopes que estaban al servicio de la enorme zona del interior.

6. Aunque estaba reconocida la soberanía de Etiopía sobre esos territorios, inclusive sobre Djibouti, había de vez en cuando intentos de ocupación extranjera. Cabe mencionar, por ejemplo, el intento infructuoso, en el siglo XVII y en el período subsiguiente, del Sultán otomano Selim I, que trató de imponer la soberanía turca sobre la región costera de Djibouti. El decreto del Sultán, en virtud del cual se proclamaba territorio turco la zona costera del Mar Rojo, tuvo escaso resultado práctico y nunca se consolidó en forma permanente la influencia turca en esa parte de África. Naturalmente, en el transcurso del tiempo Etiopía nunca cesó de afirmar sus derechos sobre sus territorios costeros y en muchas ocasiones se vio obligada a recurrir a la fuerza de las armas para expulsar a los ejércitos invasores que ocupaban ilegalmente su suelo. Este período tiene importancia, además, porque siguió intacta la dependencia *de jure* de los jefes locales, con respecto a la autoridad de la soberanía etíope, situación que suscitó una reacción positiva y que fue aceptada tácitamente por más de una Potencia europea en el siglo XIX. Sin embargo, desde el punto de vista del presente estudio, el período más interesante de la historia del Territorio es el de la segunda mitad del siglo XIX, período que posteriormente los historiadores llamaron "la lucha por África". Durante ese período Djibouti pasó a ser, por primera vez en su historia, un Territorio con un estatuto separado, aunque mal definido.

7. El interés manifestado por Francia con respecto a Djibouti se debió a la construcción del Canal de Suez que había de transformar el Mar Rojo de tránsito *cul de sac* en una vía de navegación internacional. Para dominar eficazmente el tráfico militar y de otra índole y adueñarse de importantes regiones de interés económico en el interior del continente africano, Francia y otras Potencias europeas necesitaban adquirir rápidamente la mayor cantidad de tierras posible a ambos lados del Mar Rojo. Tres Potencias europeas por lo menos — entre ellas Francia, que había puesto los ojos en Djibouti — tomaron parte en esas empresas que algunos historiadores han calificado de "incursiones piratas de las tierras costeras del Mar Rojo y del Océano Índico". Entre 1862 y 1865, Francia obligó a algunos jefes locales a firmar una serie de acuerdos en los que le cedían varios territorios pequeños en el Golfo de Tadjoura y en sus cercanías. En 1885, el Gobierno de Francia anunció por decreto la creación de la Côte française des Somalis et dépendances.

8. Cabría preguntar ahora por qué y cómo los jefes locales podían "vender" tierras que estaban bajo la soberanía de un gobierno legítimo y de su pueblo. La respuesta es tan sencilla como trágica: se trata de la flaqueza humana, que caracteriza toda la historia de África durante ese infortunado

período. Las distancias eran grandes y las comunicaciones malas; las Potencias coloniales estaban armadas hasta los dientes y los nacionalistas africanos no podían detener esa injustificada agresión. Aprovechándose de las adversas circunstancias en que se encontraban los gobiernos y los pueblos africanos, los agentes de las Potencias coloniales conseguían que los jefes más débiles, cediendo a sus dádivas o a la intimidación, firmaran tratados, cuyas disposiciones y consecuencias no entendían. Sin embargo, no cabe duda de que una cosa es "vender" o "ceder" un territorio en teoría, sin autoridad jurídica para hacerlo, y otra completamente distinta enajenar de hecho una tierra y transferir legalmente su posesión a un tercero. Pero no es menester que nos detengamos ahora sobre este punto.

9. Una rápida hojeada a la historia de la última década del siglo XIX revela que ese período fue uno de los más dolorosos de toda la historia de Etiopía. Hacia 1896 la embestida implacable que las Potencias coloniales llevaban adelante en tres frentes contra el interior del Territorio etíope había alcanzado proporciones alarmantes, hasta el punto de que Etiopía, para salvar su existencia, no tuvo más remedio que tomar las armas contra la invasión colonial en el norte. Aunque con la victoria de Adowa hubo un breve respiro, el pueblo etíope, que se había agotado repeliendo ataques de distintas direcciones, difícilmente hubiera podido librar otra batalla en menos de un año. En consecuencia, forzada por las circunstancias y deseando conservar la mayor cantidad posible de su antiguo territorio, Etiopía se vio obligada a concertar en 1897 un tratado fronterizo con Francia sobre el Territorio de Djibouti recientemente creado.

10. Aunque esa penosa época colonialista casi ha pasado a la historia, es evidente que quedan todavía problemas pendientes en cuya solución tenemos el privilegio de participar. El Comité Especial tiene el deber, y eso es su razón de ser, de formular recomendaciones rápidas y concretas sobre la forma y manera de emancipar efectivamente los restantes territorios coloniales. Como siempre, el Gobierno de Etiopía aportará su apoyo y su cooperación sin reservas para lograr la plena y rápida aplicación de cualquiera de las recomendaciones sobre los territorios coloniales. Animada por este propósito y por la esperanza de marcar un curso histórico apropiado para el Territorio de Djibouti, la delegación de Etiopía aprovecha la oportunidad de presentar este breve memorando.

11. Las autoridades censales calculan que la población total del Territorio de Djibouti no excede de 80.000 habitantes. Casi todos los habitantes del Territorio residen en dos zonas: la primera, limita al sur con el ferrocarril franco-etíope, y al norte, con la península de Buri; la segunda, en la que vive gran parte de la población, está limitada por el Mar Rojo y por las altas mesetas etíopes. Aparte de los administradores y hombres de negocios franceses que forman un sector muy pequeño de la población, los habitantes de Djibouti se dividen en dos grupos raciales básicamente diferentes: los danakiles y los issas. Las autoridades censales informan, además, que el número total de danakiles es de unos 200.000, de los cuales 40.000 viven en Djibouti y representan más de la mitad de la población de ese Territorio. Los 160.000 danakiles restantes viven en Etiopía y la mayor parte de ellos están concentrados en las provincias de Harrar, Wollo y Eritrea. Se calcula que los issas suman en total unos 150.000, de los cuales 20.000 habitan en el Territorio de Djibouti, y el resto, más de 100.000, en Etiopía. En Djibouti, los issas están concentrados en una zona mucho más pequeña que la ocupada por los afares. Conviene añadir que los principales jefes de los afares y de los issas, reconocidos como tales por las tribus de Djibouti, viven en Etiopía. El idioma principal de Djibouti es el danakil. También se habla el francés y el árabe.

12. El resumen que hemos hecho hasta ahora se refiere principalmente al aspecto demográfico y étnico de Djibouti. Pero no es menos importante observar que las actividades económicas y comerciales que existen en el Territorio son, en conjunto, resultado de la creación en Djibouti de instalaciones portuarias, como se desprende del informe del Comité de

Liberación de la Organización de la Unidad Africana (OUA). Antes de ese período, la escasa población de la región desalentaba cualquier empresa económica y comercial.

13. La estrategia imperial fue el motivo más importante para la construcción de un puerto de mar en Djibouti que sirviera como importante estación carbonera para los barcos franceses con destino al Lejano Oriente. Fue, sin embargo, la construcción de ese puerto la que dio origen a la ciudad de Djibouti. Pero las circunstancias han cambiado tan radicalmente con el transcurso del tiempo que hoy Djibouti debe casi totalmente su existencia al hecho de ser la estación terminal del ferrocarril franco-etíope que enlaza el interior del país con la costa. Al examinar la cuestión del Territorio de Djibouti es pues importante tomar en cuenta este hecho fundamental.

14. Creemos que, en este punto, una breve reseña de la historia del ferrocarril franco-etíope servirá para entender mejor la cuestión que se examina.

15. El ferrocarril franco-etíope se construyó en virtud de una concesión que otorgó el Emperador Menelik en 1894 a intereses privados franceses. Posteriormente, el propio Gobierno francés se hizo cargo de la concesión y de la construcción de dicho ferrocarril. La línea de ferrocarril entre Djibouti y Addis Abeba se terminó de construir en 1918 y desde entonces hasta la actualidad esa línea ha servido de enlace principal entre las mesetas etíopes y el Mar Rojo. En un tratado concluido entre Etiopía y Francia en 1959 se prevé que la propiedad y el control del ferrocarril se repartirá por igual entre las dos naciones. Aunque ese tratado se concertó oficialmente entre los Gobiernos de Etiopía y de Francia, en 1959 fue aprobado por la Asamblea Territorial de Djibouti.

16. Es de señalar que gran parte de las importaciones y exportaciones de Etiopía pasan hoy por Djibouti. (Por ejemplo, en 1961-1962, la proporción de las mercancías expedidas por Djibouti a Aassab, natural competidor para las mercancías destinadas a la meseta etíope, era aproximadamente de 2 a 3.) Es evidente, de todos modos, que si las mercancías procedentes de Etiopía o con destino a este país pasaran por otros puertos, desaparecería casi totalmente la razón de la existencia de Djibouti como entidad económica independiente. Actualmente, otra actividad importante de Djibouti consiste en abastecer de combustible a los barcos que pasan por el Mar Rojo, pero si se eliminara la carga procedente de Etiopía o con destino a ese país, motivo de la escala de los barcos mercantes en Djibouti, el abastecimiento de combustible podría realizarse igualmente bien en otro lugar.

17. En virtud del tratado sobre el ferrocarril franco-etíope concertado en 1959 hay funcionarios aduaneros etíopes destacados en Djibouti y las mercancías destinadas a Etiopía son precintadas antes de ser reexpedidas a su destino final. Con objeto de equilibrar los precios de las mercancías que pasan por Djibouti y por los puertos etíopes, los aranceles aduaneros se calculan teniendo en cuenta el valor de la mercancía puesta en el muelle de Djibouti. En el acuerdo se prevé también que Etiopía utilizará libremente los servicios portuarios de Djibouti. Por ejemplo, el Gobierno de Etiopía podrá construir o comprar instalaciones de elaboración y manufactura dentro de la zona portuaria y trasladar y almacenar sus mercancías sin pagar impuestos locales, con excepción de los derechos portuarios.

18. Los hechos que acabamos de mencionar indican claramente que la actividad económica del Territorio está vinculada exclusivamente con Etiopía. Incluso el agua que se consume en Djibouti se trae desde Etiopía en camiones cisternas. Aunque la Banque de l'Indochine y la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie tienen representantes en Addis Abeba, su principal función consiste en financiar las exportaciones de café; no aceptan depósitos. Análogamente, las filiales del

Commercial Bank of Ethiopia de Djibouti se dedican principalmente a financiar el comercio etíope que se realiza a través del puerto. La industria local de Djibouti propiamente dicha es insignificante. Las principales compañías que realizan operaciones en Djibouti sólo tienen filiales en esa ciudad y su sede está en Addis Abeba.

19. Hoy, Djibouti es la terminal de la línea de ferrocarril que une la costa y la meseta etíopes. Como tal, ha desempeñado y puede seguir desempeñando un papel decisivo en la economía etíope y en su futuro desarrollo. Djibouti sirve de entrada a las regiones oriental, meridional y central de Etiopía, y su función es fundamental para el crecimiento pacífico de esas partes de la nación etíope. El futuro de las zonas que de esta manera tienen acceso al mar depende en gran medida de que puedan utilizar libremente las vastas redes del comercio internacional.

20. Esta reseña tiene simplemente por objeto indicar a grandes rasgos el estudio que debería realizarse para obtener un cuadro exacto y completo del presente y el futuro de Djibouti. Es evidente que en un estudio de esta índole deberían tomarse debidamente en cuenta la historia antigua y la historia reciente de Djibouti, las características geográficas del Territorio y las posibilidades económicas, consideradas separadamente de los intereses franceses que existen en el Territorio.

21. Conviene observar que los diversos nombres que fortuitamente se han ido aplicando al Territorio son incorrectos. Es evidente que la tierra pertenece a aquellos que tradicionalmente la han habitado y no cabe discusión sobre este punto. Pero el término "Djibouti" tiene, al menos, la virtud de ser preciso sin inducir a nadie a una mala interpretación que solamente podría crear confusiones e incertidumbre cuando lo esencial es la claridad y la precisión.

22. Algunas conclusiones que se derivan de los hechos escuetos que acabamos de presentar son tan evidentes que huelga repetirlos. Bastará con que mencionemos tres de ellas:

- 1) Desde tiempos inmemoriales Djibouti ha formado parte de Etiopía. Sólo desde el desmembramiento de Africa, durante el apogeo del colonialismo europeo, adquirió Djibouti ese llamado estatuto separado.
- 2) Desde el punto de vista geográfico, Djibouti forma parte integrante del territorio etíope.
- 3) Desde el punto de vista económico, la vida de Djibouti depende completamente de Etiopía y no tiene existencia propia fuera de la economía etíope.

23. Estas son las evidentes conclusiones a que, a nuestro juicio, se debe llegar tras de examinar imparcialmente todos los hechos relativos al Territorio de Djibouti. Con ello, nuestro principal propósito es presentar un cuadro tan exacto como sea posible de la situación en esta zona para ayudar al Comité a formarse una opinión objetiva de la cuestión, cosa que debería conducir a un debate fructífero y eficaz. Huelga añadir que la delegación de Etiopía no tiene ni ha tenido nunca la intención de criticar en modo alguno el principio de la libre determinación, cuya aplicación incumbe claramente a este Comité en virtud de sus atribuciones. Repetimos que nuestro único objetivo es presentar plenamente los hechos de modo que se facilite la labor del Comité.

24. En conclusión, quisiéramos asegurar al Comité Especial que Etiopía está dispuesta a apoyar sin reserva todas las medidas en que se tomen en cuenta, entre otros, los factores geográficos, históricos y económicos, así como las realidades que, en definitiva, deberán determinar el futuro del Territorio de Djibouti. El Gobierno de Etiopía confía en que la decisión de este Comité contribuirá a mantener la paz en esta zona y a aumentar el bienestar y la prosperidad de los habitantes del Territorio de Djibouti.

CAPÍTULO XIII*

OMAN

A. EXAMEN ANTERIOR Y DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

1. La cuestión de Omán fue incluida en el programa de la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, y remitida, para su estudio, a la Comisión Política Especial. En el decimoquinto período de sesiones, la Comisión Política Especial examinó la cuestión pero, debido a la falta de tiempo, decidió aplazar el examen ulterior de la misma hasta el decimosexto período de sesiones. En los períodos de sesiones decimosexto y decimoséptimo, la Comisión Política Especial aprobó dos proyectos de resolución¹ por los cuales la Asamblea General, recordando su resolución 1514 (XV), reconocería el derecho del pueblo de Omán a la libre determinación y la independencia, pediría el retiro de las fuerzas extranjeras de Omán e invitaría a las partes interesadas a que resolvieran sus diferencias por medios pacíficos, a fin de restablecer la normalidad en Omán. Sin embargo, dichos proyectos de resolución no fueron aprobados por la Asamblea General en sus sesiones plenarias, pues no recibieron la mayoría necesaria de dos tercios.

2. En la 1191a. sesión plenaria de la Asamblea General, en su decimoséptimo período de sesiones, el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en nombre del Sultán de Mascate y Omán, formuló una invitación para que un representante del Secretario General de las Naciones Unidas visitara la Sultanía a título personal con el objeto de obtener informaciones directas respecto de la situación imperante. Ulteriormente, el Secretario General nombró al Sr. Herbert de Ribbing, Embajador de Suecia en España, como su Representante Especial para que realizase esa tarea. El Sr. de Ribbing visitó a Omán en junio de 1963 y presentó un informe que se puso a disposición de la Asamblea General en su decimotavo período de sesiones².

3. En el decimotavo período de sesiones, la cuestión de Omán fue incluida nuevamente en el programa de la Asamblea General y remitida a la Cuarta Comisión para su estudio. Un proyecto de resolución, que había recomendado la Cuarta Comisión, fue aprobado por la Asamblea General el 11 de diciembre de 1963, como resolución 1948 (XVIII). Por esta resolución, la Asamblea tomó nota del informe del Representante Especial del Secretario General y decidió crear un Comité Especial para que examinara la cuestión de Omán y presentara su informe a la Asamblea en su decimonoveno período de sesiones.

4. El Comité Especial de Omán fue integrado por el Afganistán, Costa Rica, el Nepal, Nigeria y el Senegal. Celebró 25 sesiones en la Sede y visitó El Cairo, en la República Árabe Unida, Dammmam, en la Arabia Saudita, y Kuwait, donde entrevistó a peticionarios

del Territorio, así como al Imán de Omán. El Presidente del Comité mantuvo asimismo conversaciones con el Sultán de Mascate y Omán en Londres. El Comité Especial presentó su informe a la Asamblea General el 8 de enero de 1965³.

5. La cuestión de Omán fue uno de los muchos temas incluidos en el programa provisional de la Asamblea General que ésta no pudo examinar en su decimonoveno período de sesiones. En el vigésimo período de sesiones, el tema fue remitido a la Cuarta Comisión para su consideración. Un proyecto de resolución que había recomendado la Cuarta Comisión fue aprobado por la Asamblea General en su 1399a. sesión plenaria, celebrada el 17 de diciembre de 1965, como resolución 2073 (XX). La resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Habiendo examinado el informe del Comité Especial de Omán³,

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y 1948 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963,

"Habiendo oído las declaraciones del representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los peticionarios,

"Profundamente preocupada ante la seria situación provocada por la política colonial y la intervención extranjera del Reino Unido en el Territorio,

"1. Toma nota del informe del Comité Especial de Omán, al que agradece los esfuerzos que ha realizado;

"2. Deplora la actitud del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de las autoridades del Territorio al negarse a colaborar con el Comité Especial de Omán y no haber facilitado su visita al Territorio;

"3. Reconoce el derecho inalienable del pueblo del Territorio en conjunto a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con sus deseos libremente expresados;

"4. Considera que la presencia colonial del Reino Unido en sus diversas formas impide a la población del Territorio ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia;

"5. Pide al Gobierno del Reino Unido que dé aplicación inmediata en el Territorio a las medidas siguientes:

a) Cesación de todas las medidas represivas contra la población del Territorio;

b) Retiro de las tropas británicas;

c) Libertad de los presos políticos y de los detenidos políticos y regreso al Territorio de los exiliados políticos;

d) Eliminación del dominio británico en todos sus aspectos;

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.8.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 23 del programa, documento A/5010, párr. 10; e *ibid.*, decimoséptimo período de sesiones, Anexos, tema 79 del programa, documento A/5325, párr. 8.

² *Ibid.*, decimotavo período de sesiones, Anexos, tema 78 del programa, documento A/5562.

³ *Ibid.*, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 16, documento A/5846.

"6. *Invita* al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a examinar la situación en este Territorio;

"7. *Pide* al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial, tome las medidas oportunas para dar aplicación a esta resolución y presente un informe sobre las mismas a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones."

B. INFORMACIÓN SOBRE OMÁN

Introducción

6. Se ha observado, tanto en el informe del Representante Especial del Secretario General como en el informe del Comité Especial de Omán, que al término "Omán" se le han dado distintas aplicaciones en el pasado. En un sentido general, ha significado toda la región que va desde Dhofar, al este del Protectorado de Adén, en el sur de Arabia, hasta Qatar, en el norte, "y cuyos confines son el mar y el desierto". En épocas históricas más recientes, se ha aplicado el término a una unidad política vagamente definida, que comprende el interior de lo que ahora constituye la Sultanía de Mascate y Omán. Sin embargo, se han empleado a veces los términos "Omán" y "Mascate" indistintamente para describir la totalidad de la zona gobernada por el Sultán desde Mascate.

7. En el debate sobre Omán celebrado en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, en su vigésimo período de sesiones, algunas delegaciones opinaron que el territorio de Omán comprendía los Principados (territorios de los jeques) bajo Tregua, así como la Sultanía de Mascate y Omán. El representante del Reino Unido afirmó, en cambio, que el tema que la Cuarta Comisión tenía ante sí se refería exclusivamente al territorio de la Sultanía, y que los demás territorios mencionados en el debate, tales como Sharjah y Abu Dhabi, se encontraban situados fuera de la Sultanía. Durante el examen del proyecto de resolución, que después fue aprobado por la Asamblea General, se preguntó a los coautores si la expresión "Territorio en conjunto" que figuraba en el texto de la resolución incluía a Mascate y a los Principados bajo Tregua. En respuesta, se declaró que el Territorio de Omán debía abarcar toda la zona geográfica anteriormente mencionada, y debía incluir a los Principados (territorios de los jeques) bajo Tregua, así como la Sultanía de Mascate y Omán. Por consiguiente, a continuación se presenta información bajo dos epígrafes principales: Sultanía de Mascate y Omán, y Principados bajo Tregua.

1. *Sultanía de Mascate y Omán*

Generalidades

8. La Sultanía de Mascate y Omán se encuentra situada en el extremo sudeste de la Península Árabe, al este del desierto de Rub al Jali. Su litoral marítimo se extiende alrededor de 1.600 kilómetros (1.000 millas) y su superficie total es de aproximadamente 212.000 kilómetros cuadrados (82.000 millas cuadradas). Desde el punto de vista de su geografía física, Omán se compone de tres partes: una llanura

costera, al Batinah; la cordillera de Hajar, que va del noroeste al sudeste y está cortada por el cauce de un torrente, el Udi Sumail; y una meseta estéril, cuya altura media es de 300 metros (1.000 pies) y se extiende hasta el borde del desierto. La parte noroeste de la meseta se llama Dhahirah y la parte sudeste, Sharqiyah. En el extremo sur, separadas de Omán por el desierto, se encuentran las fértiles llanuras de Dhofar. Además, la Sultanía incluye la punta norte del Cabo Musandam, que se conoce como Ru'us-al-Jibal.

9. Se calcula que la población total de Mascate y Omán asciende a más de 750.000 habitantes; la misma se halla concentrada en la zona de Jebel al Ajdar (Monte Verde) en el Hajar occidental, en Batinah y en Dhofar. Se calcula que Mascate, la capital, tiene una población de unos 6.200 habitantes, y Matrah, cerca de la capital, unos 14.000. Casi todos los habitantes son árabes musulmanes. Con la excepción de aquellos que viven en las principales ciudades, la población está organizada en tribus. Se dice que existen más de 200 tribus distintas.

10. Mascate y Omán se ha encontrado bajo dos instituciones políticas diferentes. Del siglo VIII en adelante fue un Estado independiente gobernado por un Imán que ejercía a la vez la autoridad espiritual y la temporal. En 1775, aproximadamente, al morir el Imán Ahmed bin Said, se estableció la primera Sultanía en Mascate, en la costa. A principios del siglo XIX, la institución predominante era la Sultanía, pero el Imanato fue revivido en el interior del país en 1868 y, nuevamente, en 1913. Según el Comité Especial de Omán, el interior de Omán constituyó una entidad política autónoma bajo dos Imanes sucesivos, Salim bin Rashid al-Kharusi y Mohamed bin Abdullah al-Khalili, desde 1913 hasta 1955, cuando fue ocupado por las fuerzas del Sultán con el apoyo de los británicos. Aunque las fronteras del Imanato no estaban claramente definidas, éste incluía Jebel al Ajdar, Dhahirah, Sharqiyah y Ja'lan. El Imanato parece haber poseído los atributos normales de un Estado, pues tenía un Jefe de Estado, un Consejo Supremo, una Asamblea y su propio sistema administrativo.

11. El Comité Especial de Omán señaló que el Imán era considerado por sus partidarios como Jefe del Estado y era elegido por "los dirigentes, los ancianos y los notables de la población de distintas clases y tribus", en consulta con jefes religiosos. El Imán ejercía su autoridad en todas las esferas — religiosa, política y judicial — de conformidad con el derecho islámico. El Imán tenía la obligación de consultar al Consejo Supremo acerca de todos los problemas de importancia. La Asamblea estaba compuesta por los miembros del Consejo Supremo, valies y dirigentes tribales, y se reunía cada vez que el Imán decidía convocarla.

12. El actual Imán, Ghalib bin Ali, fue elegido en 1954. Vive en el exilio, en la Arabia Saudita. Tiene un Consejo Supremo, que incluye varios jeques de las principales tribus de la zona, y un Consejo Revolucionario cuyos objetivos son "dirigir la lucha del pueblo para recuperar su independencia, y educarlo y adiestrarlo tanto dentro como fuera del país"⁴. El Consejo Revolucionario tiene un Comité Militar, un Comité Financie-

⁴ *Ibid.*, párr. 549.

ro, un Comité Cultural y una Secretaría. El Consejo Revolucionario ha nombrado representantes ante la Liga de Estados Arabes y ante varios Estados Arabes.

13. El actual Sultán ha sostenido que todos los habitantes de Omán son sus súbditos y que nunca han existido dos Estados. Ha dicho que su familia ha estado en el poder de Mascate y Omán durante más de 220 años, y que le es difícil dar informaciones sobre otros puntos históricos.

Relaciones con el Reino Unido

Tratados y acuerdos

14. La Asociación de Gran Bretaña con Mascate data de 1798, cuando se firmó un tratado entre Mascate y la compañía inglesa East India Company, en virtud del cual el primero prometía excluir a los franceses de su territorio mientras durase el estado de guerra que existía entonces entre Francia e Inglaterra. En años subsiguientes se concertaron varios otros tratados y acuerdos entre el Reino Unido y los Sultanes, incluso el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, de 1891; el Acuerdo referente a la cesión de territorio por el Sultán de Omán, de 1891; el Tratado de Comercio y Navegación, de 1939; el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y Canje de Cartas, de 1951; y el Canje de Cartas relativo a las fuerzas armadas del Sultán, a la aviación civil, a las instalaciones de la Real Fuerza Aérea y al desarrollo económico de Mascate y Omán, de 1958. En su informe, el Comité Especial de Omán realizó un análisis detallado de dichos instrumentos. Los instrumentos escritos en que se basa la actual relación entre la Sultanía y el Reino Unido — o sea, el Tratado y Canje de Cartas de 1951 y el Canje de Cartas de 1958 — se reproducen íntegramente en el anexo I del presente capítulo.

Representación del Reino en la Sultanía

15. El Reino Unido ha tenido un representante oficial en Mascate desde 1861. Originalmente tenía el título de Agente Político, pero en 1867 se cambió por el de Agente Político y Cónsul. En 1951, dejó de usarse el título de Agente Político. En la actualidad, el representante del Reino Unido en Mascate tiene la categoría de Cónsul General. En el memorando presentado por el Reino Unido al Comité Especial de Omán⁵ se indicó que, con anterioridad a 1947, el Gobierno de la India se encargaba de los intereses británicos en la Arabia oriental; las relaciones diplomáticas británicas con los gobiernos de la zona, incluso con la Sultanía de Mascate y Omán, habían estado a cargo de miembros del Servicio Político de la India, que habían empleado los tratamientos y títulos utilizados por dicho Servicio.

16. Desde 1861, el Cónsul General británico ha dependido del Residente Político británico en el Golfo Pérsico, con sede en Bahrein. Este último es responsable ante el Secretario de Relaciones Exteriores en Londres. Además de la administración de justicia que se describe más adelante (párrs. 18 a 24), el Residente Político tiene a su cargo algunas otras funciones relacionadas con el Territorio. Le incumbe la responsabilidad general de los servicios postales y las comunica-

ciones telegráficas de la Sultanía y de otros Estados de la zona. Estos servicios están administrados por un Superintendente Postal de la Oficina General de Correos del Reino Unido, la cual sufraga los gastos y percibe los ingresos procedentes del franqueo. Tales gastos e ingresos son aproximadamente iguales. Las comunicaciones telegráficas están a cargo de la empresa Cable and Wireless Ltd. en virtud de un acuerdo con el Gobierno del Sultán. El Comité Especial de Omán observó que la Sultanía carecía de sellos postales propios y empleaba sellos sobreimpresos del Reino Unido. El Residente Político también fiscaliza las transacciones en divisas que se efectúan por medio de los bancos.

17. La administración de los aeropuertos que se han construido en el Territorio en virtud del Acuerdo sobre Aviación Civil de 1934 está comprendida en la jurisdicción del Residente Político. Por este Acuerdo, el Reino Unido recibió permiso para construir aeropuertos en la Sultanía. El Reino Unido actúa como agente del Sultán en todos los asuntos relacionados con la aviación. El aeropuerto de la Isla de Masirah se emplea para fines logísticos, pero el de Salalah se considera aeropuerto internacional para líneas civiles y es administrado por el Reino Unido, en nombre del Sultán, según las normas y reglamentaciones internacionales. El uso de los aeropuertos por la Real Fuerza Aérea se rige mediante un acuerdo separado entre el Sultán y el Reino Unido.

Derechos extraterritoriales

18. El Reino Unido ha disfrutado de jurisdicción extraterritorial en el Territorio desde 1891 sobre los súbditos británicos y las personas protegidas por el Gobierno británico. En su memorando al Comité Especial de Omán, el Reino Unido señaló que el alcance de la jurisdicción concedida en los tratados comerciales de 1891 y 1939 había sido grandemente reducida en virtud de modificaciones sucesivas, efectuadas en el Tratado de 1951 con posterioridad al mismo. El acuerdo que establece este grado limitado de jurisdicción extraterritorial expirará el 31 de diciembre de 1966.

19. El Real Decreto sobre Mascate, de 1955⁶, que derogó el Real Decreto sobre Mascate de 1949, definió las atribuciones del Gobierno del Reino Unido en cuanto a la "jurisdicción dentro de los territorios del Sultán de Mascate y Omán". El Decreto fue enmendado por primera vez en 1958, principalmente para dar efecto a un acuerdo concertado entre el Reino Unido y el Sultán por el que se transfería a este último la jurisdicción sobre los nacionales indios. En virtud de una segunda enmienda publicada en 1959, el Residente Político en el Golfo Pérsico, que hasta entonces había sido el juez del tribunal principal para el Golfo Pérsico, fue relevado de sus funciones judiciales y se previó lo necesario para el nombramiento de magistrados profesionales para que ejercieran la jurisdicción del tribunal.

20. Los asuntos en los que entienden los tribunales británicos se relacionan con: a) ciudadanos no musulmanes del Reino Unido, sus colonias y Rhodesia del Sur; b) personas no musulmanas protegidas por el Gobierno británico; c) miembros de las fuerzas navales, militares y aéreas británicas, así como de cualquier "alistamiento de tropas o fuerza policial efectuado por

⁵ *Ibid.*, documento A/5846, anexo VII.

⁶ *Statutory Instrument No. 1641* del 28 de octubre de 1955.

Su Majestad, o en virtud de su autoridad, en cualquier territorio bajo su protección". Los juicios civiles originados por actos cometidos fuera de servicio se encuentran exceptuados, a menos que la persona esté sujeta a la jurisdicción británica en virtud de otra disposición del Real Decreto; d) sociedades de capital registradas en el Reino Unido o en cualquier territorio bajo la soberanía, protección o fideicomiso del Reino Unido (con excepción de ciertas zonas bajo la protección británica en el Golfo Pérsico y Adén); e) ciudadanos del Commonwealth, musulmanes o no, con excepción de los de la India, el Paquistán y Zanzíbar (se excluye la jurisdicción británica si el asunto interesa al Gobierno del Sultán o a un súbdito de Mascate); f) barcos y los aviones británicos.

21. En el Real Decreto de Mascate se prevé el establecimiento de un tribunal superior, un tribunal principal y un tribunal consular. Los dos primeros tribunales generalmente se constituyen en Bahrein, y tienen una jurisdicción más amplia que abarca a Bahrein, Qatar y los Principados bajo Tregua. Por lo común, entienden en las apelaciones relativas al tribunal consular. El tribunal de apelaciones de última instancia es el Consejo Privado, aunque los fallos están sujetos a confirmación por el Secretario de Relaciones Exteriores. El Cónsul puede asignar al Registrador ciertas causas civiles. El Residente Político puede nombrar a un Fiscal de la Corona, que cumpliría las funciones que normalmente desempeña el Fiscal General.

22. Las leyes aplicadas en los tribunales eran antiguamente las de la India Británica, pero se han introducido un código penal especial, basado en el código británico que se empleaba en Palestina, y normas más sencillas para los procedimientos en lo criminal. El tribunal tiene atribuciones para establecer la aplicación de prohibiciones o deportar personas sujetas al Decreto que ponen en peligro el orden público o tratan de provocar la enemistad o la intriga entre la población de Mascate y Su Majestad Británica o el Sultán. Si el Sultán juzga indeseable a una persona sujeta al Decreto, el tribunal, a solicitud del Cónsul, debe ordenar su expulsión de la Sultanía.

23. En los casos mixtos se procede de la siguiente manera: una persona que no esté sujeta al Decreto de Mascate puede plantear ante el tribunal consular un pleito contra una persona sujeta a ese Decreto, siempre que cumpla con ciertos requisitos en materia de depósitos. En los asuntos civiles, el caso también puede ser sometido a arbitraje, con el consentimiento de todas las partes. Si una persona a quien se aplica el Decreto ha iniciado un pleito contra una persona en el tribunal *Shari'a* (de derecho islámico) y desea apelar de la decisión de este tribunal, puede dirigirse al Cónsul, quien, a su vez, puede pedir al Sultán o a su representante que remita la causa a un tribunal de apelaciones *Shari'a*.

24. El Residente Político tiene atribuciones para dictar "Reglamentos Reales" a fin de abarcar asuntos que no se encuentran concretamente previstos en el Decreto o en la legislación aplicada por éste, y para derogar o modificar dichos reglamentos. Estos se aplican únicamente a las personas bajo jurisdicción británica. Además, por medio de estos reglamentos, se hacen aplicables a las personas sujetas a la jurisdicción británica las leyes dictadas por el Sultán respecto de cuestiones tales como derechos de aduana, importaciones y expor-

taciones, bebidas alcohólicas, tráfico de estupefacientes, navegación aérea y adquisición de tierras.

Gobierno

El Sultán

25. El Sultán es un gobernante tradicional que ejerce autoridad suprema sobre sus súbditos. Su autoridad se basa en costumbres y convenciones que se originan en el sistema tribal que prevalece en la mayor parte del país. No existe una constitución ni instituciones representativas compuestas de miembros elegidos. Los jeques o los jefes tribales tienen a su cargo una amplia gama de problemas que afectan a las tribus, pero el Sultán puede destituir a un jeque por mal comportamiento y nombrar a otro.

26. El actual Sultán, Said bin Taimur, ha gobernado Mascate y Omán desde que su padre abdicó en 1932. La dinastía, que es la de Al Bu Said, data de la segunda mitad del siglo XVIII y ha controlado, en mayor o menor grado, los territorios del viejo Imanato de Omán. En ciertos períodos de los siglos XIX y XX, la Sultanía no pudo gobernar el interior de Omán, que volvió a elegir un Imán e intentó derrocar al Sultán residente en Mascate.

27. La capital de la Sultanía es Mascate, aunque el Sultán normalmente reside en Salalah, en Dhofar. La administración de las provincias y los principales centros de población se encuentra en manos de *valies* (gobernadores) que son responsables ante el Sultán por conducto del Ministerio del Interior. Sin embargo, en los casos en que una determinada tribu se encuentra en posición de predominio, los jeques conservan su autoridad. En general, los *valies* tienen que actuar en todo lo posible por medio de los jeques. Si se plantea una controversia entre un *vali* y un jeque importante, interviene el propio Sultán. En su informe, el Representante Especial del Secretario General señaló que, desde 1957, el Sultán había recurrido cada vez más a los *valies* para la aplicación de sus decisiones. Se estaba traspasando gradualmente el poder al gobierno central.

28. Las funciones de los *valies* incluyen la recaudación de impuestos sobre la producción (*zakat*) y el arreglo de pleitos de poca importancia. En 1963 había más de 30 *valies*.

29. En 1965, el Gobierno del Sultán incluía al Asesor Personal, Comandante F. C. L. Chauncy, al Ministro del Interior, Sayid Ahmed bin Ibrahim, al Secretario Militar, General de Brigada Waterfield, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Khan Bahadur Maqbul Husain (interino).

30. Existe un comité municipal para las dos ciudades costeras de Mascate y Mathah. Sus miembros son designados, y el Presidente es el *vali* de Matrah.

Poder judicial

31. Los tribunales locales de Mascate y Omán son tribunales *Shari'a* que aplican el derecho islámico. Existen en casi todos los distritos. Los jueces o *cadies* son nombrados por el Sultán y entienden en los juicios entre musulmanes. Las causas contra no musulmanes o ciudadanos del Reino Unido y algunos otros países del Commonwealth están sujetas a la jurisdicción extra-territorial del Cónsul General Británico que se descri-

bió en los párrafos 18 a 24 *supra*. En Mascate existe un tribunal de *cadies* y un tribunal principal que entiende en las apelaciones.

Fuerzas armadas

32. El Representante Especial del Secretario General manifestó en su informe que las tropas presentes en Omán en 1963 eran, formal y técnicamente, fuerzas armadas del Sultán, con oficiales británicos en los cargos principales. Sus efectivos ascendían a 2.333 hombres, 304 de los cuales pertenecían a la gendarmería, que se dedicaba especialmente a reprimir el contrabando. Se proyectaba elevar los efectivos a 2.480 hombres. Había 26 oficiales destacados por el ejército británico y 16 oficiales locales, cuya graduación más elevada era la de subteniente. Había también 35 oficiales contratados, de los cuales 30 eran británicos y 5 eran paquistanos. Además, había 6 suboficiales extranjeros, en su mayoría británicos. La fuerza aérea del Sultán se componía de ocho aviones y 10 miembros del personal de la Real Fuerza Aérea destacados por ésta.

Economía

33. La economía se basa principalmente en el pastoreo y la agricultura. Las zonas donde hay tierras cultivables son Dhofar en el sur, el distrito alrededor de Nazwa en el Omán central y la llanura costera de Batinah. Los principales productos son los dátiles, el pescado y los cereales (estos últimos destinados al consumo interno) y, además, limas y otras frutas. Está muy generalizada la cría de ganado, sobre todo de camellos.

34. Las principales exportaciones de Mascate y Omán son dátiles, limas y pescados secos, hojas de tabaco, cueros, pelo de cabra y hortalizas. Se importa arroz, trigo, harina, azúcar, cemento, vehículos y accesorios, tejidos de algodón en piezas y otros artículos de consumo. Estas importaciones la costean, en parte, las compañías de petróleo en el marco de sus actividades de exploración y otras operaciones. En 1963, el valor total de las exportaciones ascendió a unos 2.700.000 libras, sin contar las mercancías importadas libres de derechos para fines gubernamentales cuyo valor se calculó en 500.000 libras. El comercio se efectúa en su mayor parte con el Reino Unido, la India, el Paquistán, territorios vecinos y Australia.

35. El valor de las exportaciones al Reino Unido, que en 1963 fue de 2.235 libras ascendió a 30.569 libras en 1964. La cifra de las importaciones procedentes del mismo país, que en 1963 fue de 1.239.296 libras, llegó en 1964 a 1.575.300 libras, y la de las reexportaciones del Reino Unido fue de 41.558 libras, en comparación con 15.534 libras en 1963.

Petróleo

36. La primera concesión petrolera fue obtenida por una compañía extranjera en 1937, año en que se dio a la Petroleum Development (Oman) Ltd., filial de la Iraq Petroleum Company, una concesión de 75 años de duración sobre toda la zona, salvo Dhofar. En 1953 se otorgó una concesión respecto de Dhofar a la Dhofar Cities Service Petroleum Corporation por un período de 25 años a partir de la fecha de producción comercial. La Royal Dutch Shell and Partex adquirió la Petroleum Development (Oman) Ltd. en 1960.

37. No se ha producido petróleo en cantidades comerciales, a pesar de que desde hace años se explora activamente. Sin embargo, la Petroleum Development (Oman) Ltd., anunció en 1964 que las perforaciones habían mostrado que existían reservas suficientes para emprender la producción comercial. Se espera iniciar la exportación de petróleo crudo en el segundo semestre de 1967, a razón de unos seis o siete millones de toneladas por año. Se iba a construir un oleoducto por el Uadi Sumail, hasta una estación de carga situada en Saih-al-Malih, a pocas millas al oeste de la ciudad de Mascate.

38. Los ingresos de la Sultanía proceden principalmente de los derechos de aduana y los pagos anuales de las compañías petroleras. Según las últimas cifras, los ingresos públicos anuales llegan a 1.128.000 libras aproximadamente. Además, el Gobierno del Reino Unido otorga subsidios para fines de desarrollo. En virtud del Acuerdo celebrado en 1958 entre el Sultán y el Reino Unido, este último conviene en ayudar a llevar a cabo "un programa de desarrollo civil que comprenderá la mejora de caminos, servicios médicos y de enseñanza y un programa de investigación agrícola" (véase el anexo I). Según el Representante Especial del Secretario General, la asistencia financiera ha aumentado mucho a partir de agosto de 1960; en 1963-1964 ascendió a una suma aproximada de 190.000 libras, procedente en su mayor parte de fondos del Reino Unido.

39. El Departamento de Desarrollo, creado en 1959, ha establecido estaciones agrícolas experimentales en Nazwa y Suhar, respectivamente; se investigan técnicas de riego y de abonos, y el cultivo, conforme a las condiciones locales, de variedades mejoradas de trigo, sorgo, frutas, legumbres, leguminosas y algodón. En 1963, un 46% del presupuesto de la Dirección del Departamento fue asignado a servicios sanitarios, un 15% a conservación de caminos y pistas y un 15% a la agricultura.

2. Los Principados bajo Tregua

Generalidades

40. Los Principados (territorios de los jeques) bajo Tregua se hallan al norte de Rub al Jali, entre el Reino de la Arabia Saudita y la Sultanía de Mascate y Omán; la región, llamada también Omán bajo Tregua o Costa bajo Tregua, tiene unas 400 millas de longitud y se extiende desde el extremo sudeste de la península de Qatar, por la costa meridional del Golfo Pérsico, hasta el Golfo de Omán. La Costa bajo Tregua no está claramente delimitada y varios lugares han sido objeto de controversias con países vecinos. Se ha calculado que, aproximadamente, tiene una superficie total de 83.000 kilómetros cuadrados (32.000 millas cuadradas).

41. Nunca se ha levantado un censo de población: se estima que hay en total 110.000 habitantes, de los cuales un 10% son nómadas. Dubai, la población más grande, tiene unos 55.000 habitantes y sirve de centro comercial a toda la región. La mayoría de los habitantes son árabes musulmanes y en las principales poblaciones hay indios, pakistanos, iraníes y europeos.

42. Hay siete entidades políticas, cada una de las cuales tiene un jeque o gobernante. Los territorios regidos por jeques son los siguientes (de oeste a este): Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Umm al Qaiwain,

Ras al Khaimah y Fujairah. En 1820, cuando se firmó el Tratado de Paz general no había más que cinco territorios regidos por jeques. En 1866, al fallecer el Jeque de Sharjah (de la tribu Qasimi), los dominios de éste se dividieron entre sus cuatro hijos y se establecieron las ramas separadas de la familia en Sharjah, Ras al Khaimah y dos poblaciones de la costa occidental del Cabo Musandam, a saber, Dibah y Kalba. Los británicos reconocieron a Ras al Khaimah como principado independiente en 1921; Kalba fue reconocido como independiente en 1936, considerándose entonces a Dibah como parte de Kalba. En 1961 fue asesinado el Jeque de Kalba; como éste no tenía descendiente varón por línea recta, Kalba fue reincorporada a Sharjah en 1952. El mismo año se reconoció la independencia de Fujairah, cuando el gobernante se comprometió a aceptar todos los tratados y acuerdos en vigor entre los demás gobernantes y el Gobierno del Reino Unido.

Relaciones con el Reino Unido

Tratados y acuerdos

43. Las relaciones de la East India Company y los gobernantes de estos territorios se remontan al siglo XVII, pero el primer acuerdo con el Jeque de la tribu Qasimi (Jasimi) no se firmó hasta 1806. En 1820, concluidas las hostilidades entre una expedición naval británica y los jeques de Ras al Kaimah y otros puntos de la costa de Omán, se concertó entre los jeques y el Gobierno británico un "Tratado de Paz" general. En 1835 los jeques firmaron una "Tregua Marítima" por la que se establecía una cesación temporal de hostilidades entre ellos. La tregua se renovó varias veces, en años subsiguientes, hasta 1853, en que se celebró un "Tratado de Paz a Perpetuidad" por el que el Reino Unido adquirió el derecho de velar por el mantenimiento de la paz y de tomar medidas para aplicar el Tratado en todo momento.

44. En 1892, los jeques firmaron "Acuerdos Exclusivos" idénticos con el Residente Político del Golfo Pérsico, en virtud de los cuales se comprometieron a "no ceder, vender, arrendar, hipotecar ni dar a ocupar de otra manera" parte alguna de su territorio, salvo al Gobierno británico. El Reino Unido también asumía la responsabilidad de dirigir sus relaciones exteriores. Dichos acuerdos constituyen la base de las actuales relaciones del Reino Unido y los Principados bajo Tregua. En 1911 y 1922, se celebraron otros acuerdos en virtud de los cuales el otorgamiento de concesiones para la pesca de perlas y la explotación de petróleo, respectivamente, quedaron sujetas a la aprobación del Gobierno del Reino Unido. El texto completo de estos documentos se reproduce en el apéndice II. Los gobernantes también se han comprometido a reconocer el derecho del Reino Unido a fijar los límites de sus Estados y a resolver las controversias entre ellos.

Representación del Reino Unido en los Principados bajo Tregua

45. Hay un Agente Político británico en Dubai y otro en Abu Dhabi; ambos dependen del Residente Político de Bahrein. Los agentes políticos mantienen relaciones con los Principados bajo Tregua conforme a los diversos acuerdos, compromisos y entendimientos concertados con ellos en el curso de los años.

46. Además de las relaciones exteriores de los Principados bajo Tregua, las funciones del Residente Político incluyen la supervisión general en ciertas ramas administrativas con aspectos internacionales o en ciertas cuestiones que atañen principalmente a extranjeros, y el cumplimiento de convenios internacionales tales como las convenciones sobre cuestiones sanitarias y el Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas. Las ramas administrativas antes citadas son principalmente las de servicios postales, comunicaciones telegráficas⁷, transacciones en divisas, control de la inmigración, importación de armas y estupefacientes y aviación civil.

47. Los agentes políticos asesoran a los gobernantes en lo relativo a la administración y el desarrollo de sus Principados. Las relaciones entre las compañías petroleras y los gobernantes suelen efectuarse por conducto de las autoridades del Reino Unido, o con el conocimiento de éstas. Los funcionarios de las compañías deben informar a los funcionarios o agentes políticos británicos de toda novedad importante en sus tratos con los gobernantes.

48. Por lo que al lado militar se refiere, el Residente Político ocupa la presidencia de una Comisión de Defensa formada de altos oficiales de la Armada Real, la Real Fuerza Aérea y el Ejército Británico destacados en Bahrein y Sharjah. La Comisión se encarga de las operaciones que se cumplan en los Estados del Golfo Pérsico, bajo la dirección del cuartel general de las fuerzas británicas establecido en Adén. El Residente Político también tiene el mando de los Exploradores de Omán bajo Tregua, cuerpo que fue establecido en el Territorio en 1952.

Jurisdicción extraterritorial

49. Hasta 1959, la jurisdicción extraterritorial del Gobierno del Reino Unido era ejercida directamente por el Agente Político, quien asumía funciones de magistrado de distrito, y por el Residente Político de Bahrein, quien asumía funciones de magistrado superior para el Golfo Pérsico. El Residente Político quedó relevado de sus funciones judiciales por el decreto de 1959 relativo a los Principados bajo Tregua. Sin embargo, los agentes políticos siguen cumpliendo sus funciones judiciales, además de sus funciones ejecutivas. Además los secretarios de estos magistrados tienen atribuciones para entender y dirimir causas civiles y, dentro de ciertos límites, algunas causas criminales. Las disposiciones del decreto relativo a los Principados bajo Tregua son semejantes a las del decreto relativo a la Sultanía de Mascate (véanse los párrafos 19 y siguientes, *supra*), pero en el primero de los mencionados decretos se prevé una aplicación de la jurisdicción del Reino Unido más amplia que en el segundo.

50. La jurisdicción de los tribunales británicos se extiende a: a) todas las personas, salvo los súbditos y las empresas de los Principados bajo Tregua que se han constituido en virtud de una ley sancionada por uno de los jeques; b) los miembros de una fuerza armada que haya reclutado el Residente Político bajo la autoridad

⁷ Véase el párr. 16 *supra*. Cuatro de los Principados — Dubai, Sharjah, Ajman y Umm al Qaiwain — han establecido recientemente oficinas de correos. El Servicio de Correos británico sigue encargándose de representarlos en la Unión Postal Universal. Los Principados que emiten sus propios sellos postales son los cuatro antes citados y Abu Dhabi.

de Su Majestad; c) toda persona a la que el Agente Político, en uso de su poder discrecional, inscriba en el servicio regular del Gobierno de Su Majestad o de un representante de Su Majestad; d) los barcos y aviones británicos y todos los hechos que sucedan a bordo de tales barcos y aviones. El decreto relativo a los Principados bajo Tregua dispone que tribunales conjuntos entiendan en casos mixtos, es decir, aquellos en que participen personas comprendidas y no comprendidas por el decreto. El tribunal conjunto se compone de un magistrado o el secretario del tribunal británico y de un jeque de un Principado bajo Tregua o un funcionario nombrado por éste. Sin embargo, si da su asentimiento el Residente Político, puede entender en un caso mixto un tribunal británico que tenga jurisdicción general respecto del acusado o procesado.

51. Mediante una reforma al decreto, sancionada en 1963, se hizo posible devolver la jurisdicción a un jeque de un Principado bajo Tregua sobre los asuntos en que estuvieran de acuerdo el jeque interesado y el Residente Político. Ese cambio de jurisdicción dependería de la aprobación del Secretario de Relaciones Exteriores. Con arreglo a esa reforma, hace poco tiempo se traspasó al tribunal local de Abu Dhabi la jurisdicción en cuestiones de tránsito.

52. Los poderes del Residente Político para formular "Reglamentos reales" aplicables a personas sometidas a la jurisdicción británica en los Principados bajo Tregua, son semejantes a las relativas a la Sultanía de Mascate y Omán que se describen en el párrafo 24 *supra*.

Fuerzas armadas

53. El Reino Unido estableció en 1952 una fuerza árabe común en los Principados, las levas de Omán bajo Tregua, que hoy día se llama Exploradores de Omán bajo Tregua. En 1953 los efectivos de los Exploradores se aumentaron de 100 a 500 hombres y en 1958 a 1.000 hombres; en este cuerpo hay unos 39 oficiales británicos y 90 suboficiales. El cuartel general de los Exploradores de Omán bajo Tregua se halla en Sharjah, aunque hay escuadrones acantonados en varios puntos, tierra adentro y en la costa. Los exploradores están bajo el control y la dirección del Residente Político en el Golfo Pérsico y los gastos que ocasiona este cuerpo son sufragados por el Gobierno del Reino Unido. Sus funciones incluyen el mantener la paz y el orden en los Principados bajo Tregua, escoltar a los representantes políticos británicos y hacer cumplir mandatos, órdenes y sentencias de los tribunales británicos. Se ha constituido una compañía especial de exploradores para que desempeñe funciones de policía.

Gobierno

Los gobernantes

54. Cada Principado está dirigido por un jeque (o gobernante) que es fundamentalmente jefe tribal y un miembro descendiente de una familia que ha tenido una situación predominante entre las tribus durante varias generaciones. La sucesión del jefe fallecido se decide, según la costumbre, en una reunión de miembros principales de la familia gobernante. En los últimos tiempos ha habido una tendencia a dejar que la sucesión sea de padre a hijo. Por lo común, el residente político extiende el reconocimiento del Gobierno del Reino Unido al nuevo gobernante en una ceremonia oficial.

55. Los gobernantes ejercen la autoridad entre sus súbditos conforme a los usos y tradiciones locales. Su Gobierno es de carácter enteramente personal y no hay constitución ni representantes elegidos por el pueblo.

56. No hay casi organización administrativa alguna en los Principados bajo Tregua, salvo en Dubai. En éste hay un Departamento de Aduanas y una Fuerza de Policía y en 1957 se constituyó en la población principal un Comité Municipal. En Abu Dhabi, el gobernante emplea a un recaudador de impuestos y a un jefe de policía, y ha nombrado a algunos familiares para que gobiernen en su nombre en los centros principales. Los gobernantes también emplean a asesores británicos "para fomentar la aplicación de métodos eficaces y modernos de gobierno"⁸.

57. En 1965, los gobernantes de los Principados bajo Tregua eran:

Abu Dhabi	Jeque Shakhbut bin Sultan (desde 1928)
Dubai	Jeque Rashid bin Said (desde 1958)
Sharjah	Jeque Khalid bin Muhammad (desde 1965) ⁹
Ajman	Jeque Rashed bin Humaid (desde 1928)
Umm al Qaiwain	Jeque Ahmad bin Rashed (desde 1929)
Ras al Khaimah ..	Jeque Saqr bin Muhammad (desde 1948)
Fujairah	Jeque Muhammad bin Hamad (reconocido en 1952)

Consejo de Gobernantes

58. En 1952, el Reino Unido patrocinó la creación de un Consejo de Gobernantes de los Principados bajo Tregua, encargado de coordinar las medidas relativas a cuestiones de interés común a todos los Principados. Encabeza el Consejo, que está formado de los siete Gobernantes, el Agente Político en Dubai. Desde 1952 se reúne una o dos veces por año. El Consejo ha tratado, entre otras materias, de leyes sobre cuestiones de nacionalidad y trabajo, medidas de lucha contra la langosta, reglamentaciones del tráfico de vehículos automotores, documentos de viaje, etc. Se dice que se prevé el establecimiento de un nuevo consejo "deliberante", al que cada gobernante nombrará uno o dos representantes.

Administración de justicia

59. Los tribunales locales aplican el régimen de justicia tradicional basado en el *Shari'a* y el derecho tribal consuetudinario. El gobernante a menudo desempeña las funciones de *cadí*, pero en los Principados más grandes los *cadíes* locales entienden en la mayoría de las causas. Cuando se dirimen asuntos comerciales entre súbditos del Principado bajo Tregua, dos o tres comerciantes se constituyen en tribunal y, si no pueden zanjar el asunto, lo remiten al gobernante.

⁸ Central Office of Information, *Bahrain, Qatar and the Trucial States*, Londres, R. 5680, julio de 1965.

⁹ En junio de 1965 reemplazó al Jeque Saqr bin Sultan Al-Qasimi (véanse párrs. 69 y 92 *infra*).

Economía

60. Debido a la inclemencia y sequedad general del clima de la región, la actividad económica se ha limitado al comercio marítimo, la pesca cerca de la costa, la pesca de perlas y el cultivo de datileras en los pocos oasis existentes. La cría de ganado se reduce virtualmente a la de camellos y hay pocos cultivos. La industria de la perla ha venido perdiendo importancia desde 1930 debido a la competencia extranjera; pero, al mismo tiempo, la busca y explotación de recursos petroleros se ha convertido paulatinamente en la actividad económica más importante de los Principados bajo Tregua.

Petróleo

61. Hace muchos años que las compañías petroleras tienen concesiones de exploración en grandes zonas de la Costa bajo Tregua. En 1958, la Abu Dhabi Marine Areas Ltd. — de propiedad común de la British Petroleum y la Compagnie française des pétroles — descubrió petróleo en Umm Shaif, a unas 20 millas de la isla de Das, cerca de la costa de Abu Dhabi, y en 1962 se inició la producción en cantidades comerciales. Por un oleoducto submarino se lleva el petróleo crudo del yacimiento a la isla de Das, donde se ha construido una terminal de exportación. La producción total fue de dos a tres millones de toneladas en 1963, habiendo aumentado después hasta oscilar entre cuatro y cinco millones de toneladas por año.

62. La concesionaria de tierras en Abu Dhabi es la Abu Dhabi Petroleum Co., que pertenece íntegramente a la Iraq Petroleum Co.¹⁰. En diciembre de 1963 la compañía comenzó a producir y embarcar petróleo crudo, de un yacimiento situado en Murban. En Jebel Dhana, en la costa, se ha construido un puerto terminal para barcos petroleros. Se informa que la producción de los yacimientos de Umm Shaif y Murban llegó a 17 millones de toneladas en 1965. En estos lugares se están construyendo instalaciones para elaborar el petróleo.

63. Las concesiones de exploración en los demás Principados han sido otorgadas a diversas compañías, la mayoría de los Estados Unidos.

64. Las principales exportaciones de la Costa bajo Tregua son dátiles, legumbres, cueros y productos de la pesca (incluso la de perlas). El puerto de Dubai es un centro comercial tanto para los Principados bajo Tregua como para la parte septentrional de la Sultanía de Mascate y Omán. Tiene un comercio de tránsito relativamente importante, sobre todo con el Irán y otros países vecinos. Las importaciones tuvieron un valor total de 12 millones de libras en 1964, y procedieron en su mayor parte del Reino Unido, el Japón y la India. Buena parte de estas importaciones consistió en maquinaria y materiales de construcción para las compañías petroleras. El valor de las exportaciones de Abu Dhabi al Reino Unido, que en 1963 fue de 8.200.000 libras esterlinas, ascendió a 17.300.000 libras; las importaciones procedentes del Reino Unido tuvieron un valor de 2.300.000 libras; en comparación con 2.900.000 libras el año precedente. La cifra de las reexportaciones de productos del Reino Unido ascendió a 14.154 libras, en comparación con 4.189 libras en 1963. El comercio del Reino Unido con los demás Principados fue el siguiente:

	1963	1964
	(En libras esterlinas)	
Importaciones por el Reino Unido	98.500	288.189
Exportaciones del Reino Unido ..	3.721.293	3.218.289
Reexportaciones del Reino Unido	20.701	49.445

65. Antes de las concesiones petroleras, los ingresos públicos de los Principados procedían de los derechos de aduana y los impuestos sobre la producción hortense. En 1958, los pagos anuales de las compañías petroleras a los jeques ascendieron a unas 600.000 libras. Abu Dhabi percibió cerca de tres millones de libras por concepto de regalías petroleras en 1963 y ocho millones de libras en 1965. El Gobernante de Sharjah también recibe el pago de alquileres por el aeropuerto que la Real Fuerza Aérea Británica tiene en su territorio.

66. Desde 1956 el Reino Unido otorga subsidios anuales para actividades de desarrollo en virtud del "Plan de desarrollo de los Principados bajo Tregua". En 1964 el monto de la contribución aumentó de 100.000 a 200.000 libras. Entre los proyectos financiados en virtud del Plan figura la construcción de varias escuelas de enseñanza primaria e intermedia y dos escuelas de artes y oficios, así como el establecimiento de un programa de formación de maestros; se han abierto varios dispensarios y se han efectuado rociamientos antipalúdicos. La escuela agrícola y la granja experimental que se abrieron en Ras al Khaimah en 1955 se costean con fondos suministrados en virtud del Plan. Se han ejecutado y se están ejecutando proyectos en materia de obras públicas y comunicaciones tales como los relativos al mejoramiento de los puertos de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah y Ras al Khaimah; el mejoramiento del aeropuerto, la instalación de teléfonos automáticos y de una red de suministro de energía eléctrica y la construcción de un puente en Dubai; la instalación de teléfonos, de tuberías conductoras de agua y una planta de destilación de agua en Abu Dhabi; las redes de suministro de electricidad y agua en Sharjah; y estudios sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos y lucha contra la langosta. En Dubai hay un hospital al que contribuyen todos los Principados; en 1964 iba a concluirse la construcción de un nuevo hospital y una central eléctrica en Abu Dhabi.

67. En enero de 1965, la Liga de los Estados Árabes anunció el establecimiento de un Programa de Cooperación Técnica para los Principados bajo Tregua (emiratos) y de un Fondo Árabe para financiarlo. El Programa incluiría la construcción de un camino que uniría a los Principados, la instalación de centrales eléctricas, la ejecución de proyectos de riego, el suministro de equipo agrícola y la construcción de hospitales. La Liga creó un Comité encargado de fiscalizar la ejecución del Programa.

68. El 1º de marzo de 1965, en una reunión del Consejo de Principados bajo Tregua se resolvió establecer un Fondo de Desarrollo de los Principados bajo Tregua. El Consejo convino en que debía aceptarse la ayuda de cualquier fuente que se diese sin condiciones. También se constituyó una Oficina de Desarrollo para administrar el Fondo y ejecutar programas de desarrollo bajo el control del Consejo. Han hecho contribuciones al Fondo por un total de 390.000 libras los Gobernantes de Bahrein, Qatar y Abu Dhabi (la contribución de este último fue de 100.000 libras). El Ministerio de Desarrollo de Ultramar británico anunció que contribuirá con un millón de libras, además de los pagos que efectúa

¹⁰ Comparten la propiedad de la Iraq Petroleum Co. intereses británicos, holandeses, franceses y norteamericanos.

anualmente. Según las informaciones publicadas en la prensa, los proyectos que el Consejo aprobó en julio de 1965 costarán casi 2.500.000 libras.

69. El 24 de junio de 1965 fue depuesto el Jeque Saqr bin Sultan Al-Qasimi, gobernante de Sharjah, y se nombró en su lugar a su primo el Jeque Khalid bin Muhammad Al-Qasimi. El Jeque Saqr declaró después, en El Cairo y en Bagdad, que las autoridades británicas lo habían depuesto y deportado porque había aceptado el plan de la Liga Árabe de asistencia económica a su Principado. Según fuentes británicas, el Jeque Saqr fue depuesto por su consejo de familia por grave negligencia y mala administración de los asuntos del Principado.

70. El 20 de julio de 1965, "El Comité de Representantes Personales de los Reyes y Jefes de Estado Árabes ante los Emiratos del Golfo Árabe" aprobó una resolución por la que reafirmó su intención de prestar asistencia directa a los Emiratos del Golfo Árabe y su negativa a contribuir al Fondo de Desarrollo británico que se había impuesto a la región.

C. EXAMEN DE LA CUESTIÓN POR EL COMITÉ ESPECIAL¹¹

Introducción

71. El Comité Especial examinó la cuestión de Omán en sus sesiones 446a. y 447a., celebradas en El Cairo el 15 de junio de 1966, y en su 480a. sesión, celebrada en Nueva York el 17 de noviembre de 1966.

Peticiones escritas y audiencias

72. El Comité Especial tuvo a la vista las siguientes peticiones escritas referentes a Omán:

<i>Peticionario</i>	<i>Documento</i>
Sr. Yussef Eloui, representante del Front for the Liberation of Dhofar	A/AC.109/PET.495
Sr. Saqr bin Sultan Al-Qasimi	A/AC.109/PET.501
Imán Ghalib bin Ali	A/AC.109/PET.502
Presidente y miembros del Consejo de Soberanos de los Estados bajo Tre-gua	A/AC.109/PET.503

73. En sus sesiones 446a. y 447a., el Comité Especial concedió audiencia al Imán Ghalib bin Ali (a quien acompañaban el Jeque Suleiman bin Himyar, el Jeque Mohammed bin Hamad y el Jeque Faisal bin Ali), al Sr. Saqr bin Sultan Al-Qasimi y al Sr. Yussef Eloui.

74. El Imán Ghalib bin Ali dijo que agradecía el papel eficaz que habían desempeñado las Naciones Unidas con respecto a la cuestión de Omán. Después de haber buscado justicia para su caso desde 1957, el pueblo de Omán había intentado, con el apoyo de las delegaciones que valoraban la justicia y la equidad, promover la aprobación de una resolución que enunciase sus derechos legítimos. Sin embargo, en todos esos años había tenido que hacer frente a un esfuerzo altamente concentrado que incluyó la tergiversación de los hechos, el engaño y el ejercicio de presiones de parte del Reino Unido, y cuyo resultado había sido que las Naciones

Unidas no pudiesen aprobar una resolución. Gracias al Comité Especial de Omán, que había hecho fracasar las maniobras británicas al revelar todos los datos pertinentes, se había logrado que se aprobara una resolución justa en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General.

75. Los hechos históricos habían demostrado que la existencia de Omán como Estado independiente, con plena soberanía, se remontaba al siglo VIII, cuando se lo llamaba Imanato de Omán. Sus gobernantes, llamados imanes, eran elegidos libre y directamente por el pueblo, cuyo amor por la libertad le hacía rechazar el absolutismo y la tiranía.

76. El caso de Omán constituía un vivo ejemplo de un plan colonialista de subyugar a un pueblo y explotar sus recursos mediante la intervención armada y la represión. Añadió que la intervención del Reino Unido en los asuntos de Omán había comenzado al concertarse el Tratado de 1807 con Said bin Sultan. Los tratados firmados con posterioridad habían consolidado el dominio británico y lo habían extendido a otras partes del Territorio. Con la ocupación de Nazwa, la capital, en 1954, todo el país había quedado bajo el dominio del Reino Unido. No obstante, y a pesar de la diferencia de fuerza militar entre el Reino Unido y el indefenso pueblo de Omán, las Potencias extranjeras nunca habían logrado su adhesión, sino que más bien habían suscitado una resistencia natural. La intervención del Reino Unido, basada no en una defensa de la humanidad ni de los derechos de un Estado, sino en sus propios intereses, había violado la voluntad de un pueblo y la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas. El Comité Especial de Omán había preparado un amplio informe¹² sobre la dolorosa historia de Omán, en el cual se incluía una revelación completa del papel del colonialismo desde un comienzo. El Comité Especial de Omán había declarado que creía que la cuestión de Omán constituía un problema de vital importancia que exigía la atención especial de la Asamblea General. El informe había agitado de tal manera a la Asamblea General que la cuestión había sido remitida al Comité Especial de los Veinticuatro.

77. La resolución 2073 (XX), aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, reconocía el derecho del pueblo de Omán a la libre determinación y a la independencia, y pedía la cesación de todas las medidas arbitrarias contra el pueblo de Omán, el retiro de las tropas británicas, la libertad de los detenidos y el regreso de los desterrados, así como la eliminación del dominio del Reino Unido en Omán.

78. Sin embargo, el Reino Unido, aunque Miembro de las Naciones Unidas, había hecho caso omiso de la resolución, había boicoteado al Comité y se había negado a ayudarlo a cumplir su tarea.

79. La resolución sobre Omán representaba un intento de poner fin a los actos de represión y violencia del Reino Unido y llegar a una solución justa que armonizara con los deseos del pueblo. Si bien se habían formulado desde el comienzo llamamientos por conducto de las Naciones Unidas, el rechazo de las solicitudes omaníes por el Reino Unido había provocado una enérgica oposición a los intrusos extranjeros y a una in-

¹¹ Véase también el capítulo II (párrs. 595 a 619) para una reseña de los debates sobre la resolución aprobada por el Comité Especial en su 455a. sesión, celebrada el 22 de junio de 1966, relativa a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a los territorios examinados por el Comité en sus sesiones celebradas en África.

¹² Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 16, documento A/5846.

cansable lucha en pro de los derechos y la dignidad de toda la población.

80. La respuesta del Reino Unido a las resoluciones de la Asamblea General había consistido en actos de violencia, tortura y expulsión, la detención de personas inocentes, el allanamiento de casas, el sitio de aldeas, el establecimiento de toques de queda y la restricción de la libertad de movimiento en varias regiones de Omán. El Reino Unido también había recurrido a su política tradicional de dividir para reinar, contratando agentes externos a fin de sembrar la disensión y apartar la atención del pedido de libertad y desviarla hacia las controversias y al derramamiento de sangre. Además, el Reino Unido había acumulado armamentos y había reforzado su posición militar en el país, hasta el punto de introducir armas altamente destructivas con el propósito de emplearlas contra un pueblo amante de la libertad. Mientras hablaba de retirarse de Adén, el Reino Unido continuaba reforzando sus bases y puestos en el interior y en la zona de la costa. Una medida de importancia dentro de esa nueva estrategia era el refuerzo de la gran base situada en la Isla Masirah. La potencia de la base de Masirah no era inferior a la de la base de Adén, pues la única diferencia era que el mundo exterior conocía la existencia de esta última, en tanto que la otra se hallaba cubierta por un velo de secreto y oculta a toda mirada. La reciente expansión de la base militar británica de Bahrein era prueba de que existía una amenaza permanente a la paz en la región. La transferencia de tropas de un país árabe a otro no traería seguridad a la región en conjunto, ni contribuiría a que concluyese el conflicto. El único proceder razonable que el Reino Unido podía adoptar era retirar sus fuerzas a su propio país, donde deberían estar.

81. El Reino Unido ocultaba mucho de lo que sucedía en Omán, procurando evitar la censura mundial y la condena de las Naciones Unidas. Con todo, el mundo estaba tomando conocimiento de muchos detalles acerca de la heroica lucha del pueblo omaní, de la creciente intensidad y el mayor ámbito de su resistencia armada y de su esperanza inquebrantable de que las Naciones Unidas siguieran ayudando a la causa de la libertad. El ataque contra la vida del llamado sultán, Said bin Taimur, llevado a cabo por su propia guardia personal, mostraba claramente cuál era la actitud popular.

82. Entre los actos inhumanos perpetrados por los intrusos extranjeros cabía citar la aplicación de elevadas multas — que triplicaban el valor de las pérdidas sufridas — al pueblo de cualquier región cerca de la cual hubiese incidentes entre los revolucionarios y las fuerzas de ocupación; la detención en masa efectuada sin formular acusaciones ni celebrar juicio; la detención en celdas con una sola ventana y repletas de gente, en que la comida era inadecuada, el agua contaminada y los detenidos no podían mudarse de ropa, no tenían cuidados médicos ni podían recibir regalos ni comunicaciones del exterior; y, en el caso de incidentes repetidos, los ataques sin discriminación de hogares y lugares de culto mediante cohetes lanzados desde aviones. Tanto aldeanos como detenidos habían perdido sus hogares, la salud, la vista, e incluso la vida, a causa de esas prácticas. Los oficiales británicos en Beit El Falg y en la prisión de Suhar torturaban a los detenidos a la vista de otros, a fin de crear temor y terror. Entre los métodos utilizados se contaban el de amputar extremidades, el de forzar a las víctimas a sentarse sobre llamas,

el de sumergir sus manos en aceite hirviente, y el de apretar sus huesos entre trozos de madera. Añadió que cuando el Sr. de Ribbing fue a Mascate y pidió permiso para visitar la prisión personalmente, no se le permitió penetrar en ella.

83. Estas medidas inhumanas habían originado fatiga, pobreza, ansiedad y migraciones en masa a la seguridad de otros países árabes. Algunas personas, obligadas a salir de sus hogares y conducidas a campamentos rodeados de alambradas en tanto los oficiales británicos registraban, saqueaban o destruían sus hogares, habían estado a la intemperie expuestas a los elementos tanto en verano como en invierno, y habían pasado hambre y sed durante períodos hasta de 24 horas seguidas.

84. La cuestión de Omán ya había pasado de la etapa de las resoluciones y había entrado en la de la ejecución. A causa de ello, el pueblo de Omán pedía a las Naciones Unidas y al Comité Especial que adoptaran medidas eficaces para poner en práctica las resoluciones, y les deseaba éxito en las nobles tareas emprendidas para beneficio de la libertad y de la dignidad humanas.

85. En respuesta a unas preguntas, el peticionario declaró, en lo referente al Tratado de Sib de 1920, que éste había sido firmado después de una guerra muy prolongada, como consecuencia de amenazas dirigidas por el Reino Unido contra el Sultán y la población de Omán. El peticionario citó a este respecto un pasaje de una carta del Gobierno británico de 16 de mayo de 1919, en la que se decía: "Tenemos 500.000 hombres armados en Irak, pero muy pronto dejaremos de necesitarlos allí; nos bastaría con un puñado de hombres para ocupar Omán". Al principio, las fuerzas británicas habían ocupado solamente la costa de Omán. Luego, habían penetrado más en el Territorio y, para detener la invasión, el Sultán había concertado un acuerdo con el Reino Unido. La población había respetado ese tratado hasta el momento en que el Reino Unido inició sus actos de agresión y ocupó por completo el Territorio.

86. Refiriéndose a la reiterada negativa por el Reino Unido de que hubiera fuerzas británicas en Mascate y Omán, el peticionario dijo que en muchas ocasiones se había pedido al Reino Unido que permitiese a representantes de las Naciones Unidas examinar la situación en Omán. El hecho de que el Reino Unido se hubiera negado reiteradamente era prueba suficiente de la falsedad de su mentís. La afirmación británica de que no existían presos políticos tampoco era cierta. De unos 500 presos que había en el Territorio, 150 eran en realidad presos políticos. Cuando el Sr. de Ribbing había ido a Omán para investigar las denuncias de torturas en las prisiones no se le había permitido circular libremente por el país, sino que se lo había llevado sólo a las zonas tranquilas y se le había dado información falsa. Los oficiales del Reino Unido no sólo supervisaban las torturas, sino que ellos mismos torturaban a los prisioneros.

87. El peticionario dijo que muchos de los agentes a que se había referido en su declaración eran nacionales del Reino Unido vestidos a la usanza omaní y a quienes se había enseñado a hablar árabe en el dialecto omaní; otros provenían de otras zonas sometidas a la influencia del Reino Unido. Los agentes británicos no vacilaban en recurrir a cualquier procedimiento para dividir al pueblo a fin de mantener la posición del Reino Unido en el país.

88. La afirmación del Reino Unido de que la soberanía correspondía al Sultán tenía por objeto meramente disfrazar su intervención en Omán. Todos los poderes administrativos en Mascate y Omán, en los asuntos internos y externos, incluso la defensa y la seguridad, estaban en realidad en manos de los británicos. El Gobierno del Sultán incluía funcionarios administrativos británicos y otros funcionarios bajo su autoridad. El ejército de la Sultanía incluía a oficiales del Reino Unido y de países bajo la influencia del Reino Unido; lo mismo ocurría con las jerarquías inferiores.

89. Con respecto al toque de queda y a las restricciones a la circulación impuestas a la población, el peticionario dijo que su propósito era mantener separada a la población e impedirle concentrar masas en su intento de liberarse del régimen del Reino Unido. Esta era la medida a que siempre recurrían los colonialistas contra un pueblo que luchaba por su libertad.

90. En lo referente a la base de Al Masirah, el peticionario declaró que había sido establecida después de la segunda guerra mundial y estaba bajo ocupación militar de los británicos, que la ampliaban y la fortificaban constantemente, cavando trincheras y almacenando enormes cantidades de armamento. Además, las tropas que guarnecían la base se reforzaban a diario.

91. El pueblo de Omán esperaba que el Comité Especial ejerciese presión sobre el Reino Unido para que aplicase plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas concernientes a su Territorio y cooperase con el Comité para ayudarle a alcanzar la libre determinación. También esperaba que el Comité Especial crease un subcomité para examinar la cuestión de Omán.

92. El Sr. Saqr bin Sultan Al-Qasimi manifestó que tanto él como su país habían sufrido bajo la opresión y la agresión del colonialismo británico. El peticionario había sido expulsado de su país a viva fuerza. Sin embargo, no limitaría sus observaciones a su país sino que se referiría también a los abominables crímenes cometidos por el imperialismo británico en el Sur ocupado, en Omán y en el Golfo Árabe. Este imperialismo, que dominaba ilegalmente la región, impedía que se realizara su destino y pretendía terminar para siempre con la presencia árabe en la costa de Omán y en el Golfo.

93. El Comité Especial debería prestar atención a la tragedia consiguiente, que podría llegar a ser una repetición de los acontecimientos de Palestina. Los inmigrantes judíos se habían apoderado de Palestina y lo mismo sucedía actualmente con la migración de extranjeros al propio país del orador, que era enteramente árabe, migración que se llevaba a cabo por los mismos métodos utilizados en Palestina.

94. Los imperialistas estaban actualmente en una fase que correspondía a la anterior a 1948 en la cuestión de Palestina. A fin de fomentar la inmigración a la costa de Omán, estaban comprando tierras y estableciendo campamentos. Incluso aprovechaban la experiencia israelí a este respecto para organizar y financiar operaciones de inmigración. Ello constituía un grave peligro para toda la costa de Omán, y exigía suma precaución.

95. El peticionario no ocultaba la falta de progreso de su país ni su extrema necesidad de ayuda en todos los campos. Necesitaba también que el mundo conociera su situación, porque sólo medidas inmediatas y efec-

tivas le permitirían frustrar los planes colonialistas de sionistas y británicos, que tenían por objeto dividirlo y convertirlo en presa fácil para la ocupación extranjera, en flagrante violación de los principios de las Naciones Unidas.

96. La historia de la presencia británica en la región se remontaba al siglo XVII. Los piratas portugueses e ingleses habían chocado con la fuerte resistencia de los emires y jeques, que sirviera para neutralizar al imperialismo en esa época. A pesar de las operaciones militares llevadas a cabo durante más de un siglo, el imperialismo no había podido obtener una victoria decisiva. Sólo las matanzas inclinaron la situación en favor de los imperialistas. Los árabes se rindieron al fin a los piratas ingleses en 1820.

97. Se necesitarían libros enteros para hablar del heroísmo de los árabes en su resistencia a los usurpadores que, en su última campaña, estuvieron apoyados por una fuerza compuesta por 876 unidades navales y 800 embarcaciones menores: este fue el único medio por el que pudieron imponer su presencia en la costa árabe. Después, los jeques de la zona firmaron en 1820, a punta de bayoneta, un llamado tratado. Los colonialistas se esforzaron en ratificar este supuesto tratado en 1906. Pero el tratado carecía de valor en derecho internacional. La presencia británica en la zona no tenía ningún apoyo internacional, y era injustificada, pues se debía a la fuerza de las armas de una época totalmente diferente de la actual.

98. La presencia británica no respondía a los deseos del pueblo de la costa de Omán. La prolongada lucha de este pueblo y el hecho de que sólo después de 180 años se lo hubiera podido obligar a firmar un tratado eran pruebas irrefutables en este sentido. En una época que había visto la firma de la Carta de las Naciones Unidas ese tratado debería considerarse nulo y sin valor.

99. Añadió que cuando estuvo en Sharjah en mayo de 1965, un mes antes de ser secuestrado, había advertido al Sr. Thompson, Ministro de Estado del Reino Unido, que nunca reconocería al tratado como fundamento legal de la presencia británica en la zona; y le había pedido que transmitiese esa advertencia a su Gobierno. Ya antes se había negado a acceder a las solicitudes semioficiales presentadas por el Sr. Shepherd, Comandante de la Fuerza Aérea británica en Sharjah, con el fin de arrancarle la promesa de renovar el arriendo a los británicos de la base militar de Sharjah. A continuación reafirmó que el Emirato de Sharjah era parte integrante de la patria árabe, que se extendía desde el Océano hasta el Golfo.

100. Dijo que la cuestión de su secuestro, aunque parecía personal, estaba en realidad relacionada con la causa de toda la costa. En su lugar se había designado en Sharjah a un gobernante ilegal a fin de intimidar a otros monarcas y someterlos a la dominación extranjera. Pocos días después de su secuestro y de la designación de gobernante ilegal, el Gobierno del Reino Unido, con la intervención de ese gobernante, había podido renovar el acuerdo referente a la base de la Fuerza Aérea en Sharjah.

101. Algunos gobernantes libres se habían mantenido firmes contra el Reino Unido en la cuestión de la ayuda de la Liga de los Estados Árabes. Al principio, habían aceptado esa ayuda y habían comunicado su ratificación al Secretario General Adjunto de la Liga;

sin embargo, ante la intimidación del Reino Unido, habían cambiado de idea rápidamente. El Reino Unido había movilizado sus fuerzas, incluso tanques y ametralladoras, y había rodeado a esos gobernantes en sus capitales. Pocos días después, éstos habían enviado a la Liga de los Estados Arabes cablegramas redactados en forma similar. Estos cables habían sido dictados por el Alto Comisionado Británico. En todos ellos se pedía la supervisión de la ayuda de la Liga de los Estados Arabes por el British Development Council y la asignación de fondos conforme a los deseos de los funcionarios británicos. La Liga de los Estados Arabes podía presentar estos cablegramas para que el Comité los examinara.

102. La única solución efectiva de la cuestión de la costa era que el Comité Especial se esforzara en pro de la eliminación del imperialismo en todas sus formas y de la liberación de la costa de Omán en un esfuerzo para integrarla con otros Estados árabes a fin de formar una entidad desde el Océano hasta el Golfo.

103. El Reino Unido había intentado fortalecer su posición en la costa de Omán trasladando su base militar desde Arabia Meridional a la costa del Golfo, a Bahrein y Sharjah. El traslado de esta base sólo agravaría el problema; demostraba que el Reino Unido conservaba su mentalidad imperialista y que todavía tenía intenciones malignas en relación con la costa. Su acción crearía en la zona un estado de tirantez de consecuencias imprevisibles. Las fuerzas del Reino Unido estaban cometiendo atrocidades en los emiratos de la costa, arrestando a hombres libres, torturándolos y perpetuando un estado de terror y amenaza para todos los que expresaban sus sentimientos o reclamaban la independencia y la eliminación del colonialismo a fin de llevar una vida digna y libre en su propio país.

104. El Reino Unido había expulsado a muchos árabes y había aterrorizado al resto, a fin de asegurar su silencio. No vacilaba en amenazar a los gobernantes de la zona, y en tratar de levantarlos unos contra otros, mediante halagos, promesas y amenazas.

105. No tenían justificación las tentativas que el Reino Unido hacía para mantener su base, sus fuerzas y su influencia en una tierra cuyo pueblo no aceptaría sino la independencia.

106. Los militantes libres que luchaban por la liquidación del colonialismo tenían una misión: la eliminación de todos los vestigios del colonialismo en todo el mundo. La tierra árabe de Omán y el Golfo había sufrido en distintas formas la opresión y el terror que llevaba consigo el colonialismo. Había llegado el momento de que esa tierra lograra la libertad y la independencia para gozar de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal aprobada por las Naciones Unidas, que contaba con el apoyo de todas las naciones libres y honorables del mundo.

107. La costa de Omán esperaba esta acción del Comité Especial y confiaba en que sus esperanzas se verían realizadas.

108. En respuesta a preguntas, el petionario dijo que al principio el Reino Unido no había pagado arriendo por la base de Sharjah pero que más tarde se había convenido en el pago de derechos nominales por valor de 2.000 libras anuales. También había en el Territorio otras bases y a lo largo de la costa de Omán se hallaban destacados entre 15.000 y 16.000 soldados del

Reino Unido. El petionario opinaba que el Reino Unido no trasladaría su base de Sharjah sin derramamiento de sangre.

109. Añadió que no reconocía la existencia de ningún tratado con el Reino Unido y cuando así lo hizo saber a los británicos, se le depuso.

110. El Reino Unido no había ofrecido servicios de enseñanza hasta 1953, año en que el petionario solicitó ayuda del Gobierno de Kuwait, que proporcionó un maestro. Desde entonces, Irak, Kuwait, la República Árabe Unida y Siria habían enviado 550 maestros en total, pero, el Reino Unido no había enviado ninguno y, en realidad, el Alto Comisionado británico había aconsejado al petionario no ampliar los servicios educativos en su país. En 1966 se dispondría de dos maestros graduados, uno en la Universidad de Moscú y el otro en El Cairo. En lo relativo a los servicios de sanidad, el petionario dijo que el Reino Unido había establecido un hospital y una farmacia. Antes que el Reino Unido hubiese invadido la zona, existía una gran flota pesquera y una industria de pesca de perlas. Las fuerzas del Reino Unido habían puesto fuego a la flota, que constituía el principal recurso económico del país. Sólo quedaba la industria de la pesca de perlas, que estaba disminuyendo. Aunque el Territorio tenía buenas tierras agrícolas, sólo una pequeña parte estaba en cultivo con métodos sumamente primitivos. Las zonas pesqueras tampoco se explotaban cabalmente. Recientemente se había descubierto petróleo en la región, pero el petionario pensaba que ello sería más bien una maldición que una bendición, pues el Reino Unido se empeñaría indudablemente en mantener al Territorio bajo su férula a causa del petróleo.

111. El Sr. Yussef Eloui (Front for the Liberation of Dhofar) apuntó que consideraba un honor la oportunidad de presentar al Comité Especial las justas reivindicaciones de su pueblo, que había sido invadido por la fuerza, sojuzgado por los imperialistas extranjeros y privado de sus derechos humanos inalienables.

112. Lo que el Reino Unido denominaba la Sultanía de Mascate estaba formada por tres regiones: Mascate y Dathina era una, Omán interior era otra, y Dhofar la tercera. El Reino Unido había comenzado colonizando a Mascate y su litoral, luego había invadido Dhofar en 1887, y Omán en 1957 por la fuerza armada. A pesar de las tentativas del Reino Unido para desorientar a la opinión pública y ocultar las pruebas de sus actos agresivos, en todo el mundo era cada día más conocido el desprecio de ese país por las resoluciones de las Naciones Unidas y por las protestas revolucionarias del pueblo.

113. Fundamental era señalar ciertos hechos sobresalientes que mostraban la tendencia de la Potencia Administradora a impedir el progreso y el desarrollo de la comunidad bajo su dominio. Esos hechos eran: un bloque militar impuesto con fines estratégicos para defender los intereses del Reino Unido en la zona del Golfo Árabe contra las llamadas infiltraciones comunistas; bases terrestres, navales y aéreas estratégicas — con depósitos subterráneos para armas nucleares — que ponían en contacto a las fuerzas del Reino Unido en el Mediterráneo y en Asia Sudoriental; flotas aéreas que funcionaban constantemente, día y noche, manteniendo contacto radiofónico con otras flotas de ultramar; y la evacuación de los moradores locales de las zonas de las bases a fin de dar libertad de movimiento a las operacio-

nes militares, que eran muchas veces el medio de eliminar a la población.

114. En sus esfuerzos por reforzar el poderío militar, el Reino Unido había descuidado el desarrollo económico y social de la zona bajo su control. La ignorancia y las enfermedades eran manifiestas en aquellas localidades que no disponían de escuelas ni de atención médica. En un mundo en que se lanzaban campañas contra el hambre, el Reino Unido se caracterizaba por importar el hambre en sus territorios y además por privar a toda una población de los beneficios sociales mínimos, para perseguir sus propios fines colonialistas. La reacción había acabado por producirse, y el 9 de junio de 1965 estalló la revolución armada con la que el pueblo pretendía erradicar el dominio colonial del Reino Unido en todas las formas, es decir, económica, militar y administrativa, e incluso el desmantelamiento de todas las bases; lograr la libertad y el gobierno propio para toda la población; conseguir la independencia económica y la igualdad social recuperando el control de los recursos materiales y las estructuras internas del país; y asegurar la dignidad humana por medio de servicios educativos, médicos, agrícolas e industriales apropiados.

115. En interés de la democracia y de los derechos humanos, el pueblo de Omán pedía al Comité que uniera con él sus fuerzas apoyando sus demandas justas y legítimas, asegurándole la libre determinación, declarando el dominio colonial del Reino Unido ilegítimo y diametralmente opuesto al deseo del pueblo, y pidiendo a ese país que retirase sus bases aéreas, terrestres y navales de la región, pusiera fin a sus métodos represivos, liberase a todos los detenidos políticos y suprimiese la ley marcial que se aplicaba en virtud de las disposiciones de emergencia.

Declaraciones de los miembros

116. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que la actitud del Reino Unido en lo referente a Omán demostraba una vez más que ese país estaba dispuesto a recurrir a la fuerza para oponerse a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Esa actitud obedecía a la preocupación por salvaguardar los intereses de los monopolios petroleros británicos y al deseo de conservar bases militares de suma importancia. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General la delegación de la Unión Soviética había apoyado la petición de independencia de Omán y se había declarado en favor de la evacuación de las fuerzas armadas destacadas en el Territorio. La presencia de estas tropas, que ocupaban ilegalmente Omán y las demás regiones, y oprimían a la población local, era un obstáculo importante para la independencia y la libre determinación del Territorio. El Comité Especial debía pues, sin más demora, condenar la existencia de estas bases militares y exigir que se retirasen las tropas destacadas en ellas y se aplicaran íntegramente las resoluciones de la Asamblea General referentes a Omán.

117. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que quería aclarar brevemente la posición de su Gobierno en el caso de Omán. Los Estados Unidos habían mantenido, mediante tratados, relaciones con los Sultanes de Mascate por espacio de 133 años, o sea desde 1833. Esas relaciones habían sido renovadas en 1938. Basándose en el concepto de la

igualdad soberana, los Estados Unidos habían celebrado siempre cualesquiera negociaciones directamente con el Sultán, y no a través de intermediarios. Por consiguiente, era evidente que las autoridades de los Estados Unidos jamás habían puesto en tela de juicio la soberanía de la Sultanía; por tal motivo su delegación no participaría en el debate del Comité Especial sobre la cuestión de Omán.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

118. En su 480a. sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1966, el Comité Especial, a propuesta del Presidente, decidió informar a la Asamblea General que, por falta de tiempo, no había podido terminar el examen de la cuestión de Omán y que, a reserva de cualquier otra indicación que la Asamblea General descare hacerle en su vigésimo primer período de sesiones, el Comité Especial examinaría la cuestión en sus sesiones de 1967, con miras a la aplicación de las disposiciones de la resolución 2073 (XX) de la Asamblea.

ANEXO I

Tratado y canje de cartas de 1951 y canje de cartas de 1958

A. TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN CONCERTADO ENTRE SU MAJESTAD Y EL SULTÁN DE MASCATÉ Y OMÁN [Mascate, 20 de diciembre de 1951]

Su Majestad, el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar, y el Sultán Said bin Taimur bin Faisal, Sultán de Mascate y Omán y Dependencias,

Deseando confirmar y fortalecer las relaciones de amistad que los unen y fomentar y aumentar sus relaciones comerciales mediante la conclusión de un nuevo tratado que sustituya al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en Mascate el 5 de febrero de 1939,

Han designado como plenipotenciarios:

Su Majestad, el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar (denominado en lo sucesivo Su Majestad),

En nombre del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al Teniente Coronel Sir William Rupert Kay, W.C.I.E., C.S.I., Residente Político de Su Majestad en el Golfo Pérsico;

El Sultán de Mascate y Omán y Dependencias (denominado en lo sucesivo el Sultán), a sí mismo;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Para los fines del presente tratado:

1) La expresión "territorio de Su Majestad" o las referencias hechas a territorios de una de las Altas Partes Contratantes en relación con Su Majestad significa el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (denominado en lo sucesivo el Reino Unido) y cualesquiera territorios a los que se aplique el presente Tratado en virtud de las extensiones previstas en el artículo 15, y la expresión "territorios del Sultán" o las referencias hechas a territorios de una de las Altas Partes Contratantes en relación con el Sultán significa Omán y sus Dependencias.

2) La expresión "nacionales de Su Majestad" o las referencias hechas a los nacionales de una de las Altas Partes Contratantes en relación con Su Majestad, significa todos los ciudadanos del Reino Unido y colonias, todos los ciudadanos de Rhodesia del Sur y todas las personas protegidas por el Gobierno británico, a excepción de los nacionales de Kuwait, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah y Kalba, y la expresión

"nacionales del Sultán" o las referencias hechas a los nacionales de una de las Altas Partes Contratantes en relación con el Sultán, significa todos los súbditos del Sultán, cualquiera que sea el lugar de su residencia. Para los fines de los artículos 3, 5, 6 y 7, el vocablo "nacionales" debe considerarse como comprensivo de las personas jurídicas constituidas de conformidad con las leyes de los territorios de una de las Altas Partes Contratantes.

3) La expresión "buques británicos" o las referencias a buques de una de las Altas Partes Contratantes, en relación con Su Majestad, significa todos los buques registrados en algún puerto del Reino Unido o de cualquier territorio en el que se aplique el presente tratado en virtud de las extensiones previstas en el artículo 15; y la expresión "buques de Omán" o las referencias hechas a buques de una de las Altas Partes Contratantes, en relación con el Sultán significa todos los buques registrados de conformidad con las leyes del Gobierno del Sultán.

4) La expresión "aeronaves británicas" o las referencias hechas a aeronaves de una de las Altas Partes Contratantes en relación con Su Majestad, significa todas las aeronaves registradas de conformidad con las leyes del Reino Unido o de cualquier territorio en que se aplique el presente Tratado en virtud de las extensiones previstas en el artículo 15; y la expresión "aeronaves de Omán" o las referencias hechas a aeronaves de una de las Altas Partes Contratantes en relación con el Sultán significa todas las aeronaves registradas de conformidad con las leyes del Gobierno del Sultán.

5) La expresión "país extranjero" significa:

a) En relación con Su Majestad, cualquier país o territorio que no sea: i) el Reino Unido; ii) el Canadá; iii) el Commonwealth de Australia; iv) Nueva Zelandia; v) la Unión Sudafricana; vi) la India; vii) el Pakistán; viii) Ceilán; ix) un territorio cuyas relaciones internacionales incumban a Su Majestad, por mediación de cualquiera de sus Gobiernos, en la fecha de la firma del presente Tratado; x) la República de Irlanda; y xi) para los fines del artículo 6, Birmania; y

b) En relación con el Sultán, cualquier país o territorio que no forme parte de Omán o sus dependencias.

Artículo 2

Entre los territorios de las Altas Partes Contratantes existirá una libertad total de comercio y de navegación. Cada una de las Altas Partes Contratantes permitirá a los nacionales de la otra la entrada en todos sus puertos, ensenadas y ríos, con sus buques y cargamentos, y también entrar, transitar, residir y dedicarse al comercio y al tráfico, al por mayor o al detalle, en cualquiera de sus territorios, y salir de ellos, siempre que cumplan los requisitos y normas vigentes o que puedan dictarse en relación con la entrada, tránsito, residencia y salida de todos los extranjeros.

Artículo 3

1) Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán en todos los territorios de la otra, en cuanto al comercio, el transporte marítimo y el ejercicio del tráfico, de todos los derechos, privilegios, inmunidades, ventajas y protecciones de cualquier clase, de que disfruten o puedan disfrutar los nacionales de la otra Alta Parte Contratante o los de cualquier país extranjero. Especialmente, cada una de las Altas Partes Contratantes permitirá a los nacionales de la otra en sus territorios, negociar, comprar, traficar, vender, importar y exportar toda clase de mercaderías en las mismas condiciones aplicables o que puedan aplicarse a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier país extranjero.

2) Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes no estarán sujetos, en los territorios de la otra, a impuestos, derechos, exacciones, restricciones u obligaciones de cualquier clase, distintos o más onerosos que aquellos a que estén o puedan estar sometidos los nacionales de la otra Alta Parte Contratante o los de cualquier país extranjero; no obs-

tante, lo dispuesto en este artículo no se interpretará, en relación con cualquier territorio de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, en el sentido de que obligue a esa Alta Parte Contratante a conceder a los nacionales de la otra, no residentes a efectos fiscales en su territorio, las mismas exenciones, rebajas y reducciones personales de impuestos concedidas a sus propios nacionales.

Artículo 4

1) En todo lo referente a la navegación y al transporte marítimo, cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a conceder, en cualquiera de sus territorios, a los buques de la otra (y al pasaje y carga que transporten) un trato no menos favorable en cualquier aspecto al que reciban sus propios buques o los buques de cualquier país extranjero (y el pasaje y carga en ellos transportados, como queda expresado).

2) Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al tráfico de cabotaje ni a la navegación interior.

Artículo 5

En los territorios del Sultán se permitirá a los nacionales de Su Majestad arrendar y adquirir, en cualquier forma legal, toda clase de bienes, poseerlos o disponer de ellos en cualquier forma legal, en las mismas condiciones establecidas o que puedan establecerse para los nacionales del país extranjero más favorecido, cuando se trate de bienes inmuebles, y en las mismas condiciones establecidas o que puedan establecerse para los nacionales del Sultán o los nacionales del país más favorecido, cuando se trate de bienes muebles.

Artículo 6

1) Las mercaderías cultivadas, producidas o fabricadas en los territorios de algunas de las Altas Partes Contratantes, que se exporten a los territorios de la otra, sea cual fuere el lugar al que lleguen, no estarán sujetas a derechos ni gastos de aduana distintos o más onerosos que los que satisfagan las mismas mercaderías cultivadas, producidas o fabricadas en cualquier país extranjero.

2) Las mercaderías que se exporten a los territorios de una de las Altas Partes Contratantes no estarán sujetas, en los territorios de la otra, a derechos ni gastos de aduana más onerosos que los que se satisfagan por la exportación de mercaderías análogas a cualquier país extranjero.

3) Los derechos de aduana exigibles en los territorios del Sultán sobre las mercaderías cultivadas, producidas o fabricadas en los territorios de Su Majestad y sobre las mercaderías importadas por nacionales de Su Majestad deberán satisfacerse en el puerto o lugar de los territorios del Sultán al que lleguen esas mercaderías y, una vez realizado el pago, tales mercaderías quedarán exentas del pago de cualesquiera otros derechos de aduana.

4) En los territorios del Sultán, las mercaderías cultivadas, producidas o fabricadas en los territorios de Su Majestad o importadas por los nacionales de Su Majestad estarán exentas del pago de derechos de aduana en los siguientes casos:

a) Las mercaderías destinadas y consignadas a país extranjero que sean trasbordadas de un buque o aeronave a otros, en cualquiera de los puertos o aeropuertos del Sultán o que, con tal fin, sean desembarcadas provisionalmente y depositadas en cualquiera de las aduanas del Sultán, en espera de la llegada del buque o aeronave en el que deban ser reembarcadas; no obstante, las mercaderías así desembarcadas sólo quedarán exentas si su consignatario o agente, a la llegada del buque o aeronave, ha entregado las citadas mercaderías para su conservación bajo precinto aduanero, y declarado que han sido desembarcadas para su trasbordo, indicando al propio tiempo su lugar de destino en el extranjero, y si en un plazo no superior a tres meses a partir del momento de su desembarco las referidas mercaderías son realmente embarcadas para el mencionado país extranjero en la forma declarada, sin haber

cambiado entre tanto de propietario, y siempre que se satisfagan todos los gastos de aduana antes de su embarco.

b) Las mercaderías no destinadas y consignadas a los territorios del Sultán que hayan sido desembarcadas por error, siempre que se pongan bajo la custodia de las autoridades aduaneras y vuelvan a embarcarse con destino al extranjero en un plazo de dos meses a partir de su desembarco, y que se satisfagan todos los gastos de aduana antes de reembarcar dichas mercancías.

c) El carbón, el combustible y el petróleo, las provisiones, repuestos y pertrechos de la Marina y las Fuerzas Aéreas, propiedad de Su Majestad, desembarcados en los territorios del Sultán para su utilización por los buques de las Fuerzas Navales y por las aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Su Majestad; no obstante, deberán satisfacerse derechos de aduana, si cualquier mercadería así exenta se vende o si se dispone de ella, en cualquier otra forma, en los mercados locales.

d) Las mercaderías trasbordadas o desembarcadas durante la reparación de los daños causados a buques o aeronaves por las inclemencias del tiempo o por desastres ocurridos en el mar o en el aire, siempre que la carga así desembarcada se ponga bajo la custodia de las autoridades aduaneras y se reembarque con destino al extranjero en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su desembarco y que se satisfagan todos los gastos de aduana.

5) En los casos citados en el párrafo 4 de este artículo se observarán las formalidades aduaneras establecidas para el desembarco, inspección, despacho y embarco de mercaderías.

6) Las autoridades aduaneras del Sultán podrán disponer en subasta pública de todas las mercaderías no despachadas que se encuentren en las aduanas del Sultán transcurridos cuatro meses desde la fecha de su desembarco, después de notificar a los agentes del buque o aeronave en cuestión. El producto de la venta de tales mercaderías, una vez satisfechos los gastos de la subasta y los derechos y gastos de aduana se depositará por un año, siendo entregado a su propietario si lo solicita dentro de ese plazo, transcurrido el cual no se atenderá reclamación alguna.

7) En el presente artículo, las palabras "gastos de aduana" significan los gastos distintos de los derechos de aduana, incluyendo las tasas de desembarco, tránsito, pesada, alquiler de almacenes o de espacio, vigilancia y horas extraordinarias.

Artículo 7

1) Todos los derechos de aduana pagaderos en los territorios del Sultán deberán ser satisfechos en efectivo y no en especie.

2) El valor de las mercaderías sujetas a derechos de aduana se fijará de conformidad con el precio de mercado, según la práctica comercial normal en Mascate.

3) Cualquier controversia que surja entre un nacional de Su Majestad y las autoridades aduaneras de Omán en cuanto al valor de cualesquiera mercaderías, deberá resolverse recurriendo a dos peritos (de los que cada parte nombrará a uno) cuya decisión obligará a ambas partes. En el caso de que esos peritos no puedan llegar a un acuerdo, se designará un árbitro cuya decisión será inapelable.

Artículo 8

Los impuestos y recargos internos de todo tipo pagaderos en el territorio de alguna de las Altas Partes Contratantes en provecho del Estado, o de órganos del gobierno local o municipal, por mercaderías cultivadas, producidas o fabricadas en los territorios de la otra Alta Parte Contratante, o en relación con ellas, no serán distintos o mayores que los pagaderos en circunstancias análogas por mercaderías semejantes cultivadas, producidas o fabricadas en los territorios de la citada Alta Parte Contratante, o en relación con ellas, o en cualquier país extranjero.

Artículo 9

1) No deberá imponerse o mantenerse prohibición o restricción alguna a la importación en los territorios del Sultán de cualesquiera mercaderías sea cual fuere el lugar de donde procedan, cultivadas, producidas o manufacturadas en los territorios de Su Majestad, que no se aplique igualmente a la importación de mercaderías semejantes cultivadas, producidas o fabricadas en cualquier país extranjero.

2) No se impondrá o mantendrá prohibición o restricción alguna a la exportación de cualesquiera mercaderías procedentes de territorios del Sultán a los territorios de Su Majestad, que no se aplique igualmente a la exportación de las mismas mercaderías a cualquier país extranjero.

3) Podrán hacerse excepciones a las normas generales establecidas en los párrafos anteriores de este artículo en caso de:

a) Prohibiciones o restricciones impuestas en interés de la seguridad pública;

b) Prohibiciones o restricciones relativas al tráfico de armas, municiones y pertrechos de guerra o, en casos excepcionales, de cualesquiera otros suministros militares;

c) Prohibiciones o restricciones impuestas por motivos de salud pública;

d) Prohibiciones o restricciones impuestas para la protección de animales o plantas, especialmente para la protección contra plagas o riesgos de degeneración o extinción, y las medidas adoptadas contra las semillas, plantas y animales nocivos.

Artículo 10

El Sultán se compromete por el presente Tratado a velar por que el movimiento de las mercaderías en tránsito no se vea dificultado o retrasado por formalidades y normas aduaneras innecesarias, y por que se den las máximas facilidades para su transporte.

Artículo 11

1) Cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes podrá designar cónsules residentes en los territorios de la otra, previo el consentimiento y la aprobación de ésta en lo referente a las personas así designadas y a los lugares en que deban residir. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete además a permitir que sus propios nacionales sean designados para cargos consulares por la otra Alta Parte Contratante, siempre que cualquier persona así designada no tome posesión de su cargo, sin contar con la previa aprobación de la Alta Parte Contratante de la que sea nacional.

2) Tales cónsules podrán desempeñar funciones consulares y disfrutarán de privilegios e inmunidades de conformidad con el derecho internacional o con la práctica establecida respecto de los cónsules en los territorios en que residan.

Artículo 12

1) Los buques y aeronaves británicos que se vean forzados a arribar a los territorios del Sultán recibirán de las autoridades locales toda la ayuda necesaria posible para que puedan avituallarse, repostar combustible y realizar reparaciones con objeto de continuar su travesía o vuelo.

2) En el caso de que un buque británico embarranque o naufrague en las costas de los territorios del Sultán o cerca de ellas, o de que una aeronave británica caiga o realice un aterrizaje forzoso en los territorios del Sultán, las autoridades del Sultán deberán prestar toda la asistencia posible al salvamento del buque o aeronave, de su carga y de sus pasajeros; también prestarán toda la ayuda y protección posibles a las personas salvadas y les ayudarán a llegar al consulado británico más próximo; además, se tomarán todas las medidas posibles para que esos buques o aeronaves y su cargamento, suministros, equipo y pertrechos, y los artículos que transporten o formen parte del navío o aeronave, o bien el producto de su venta si se venden, así como los documentos que se encuentren a bordo de esos navíos o aeronaves, se entreguen a sus propietarios o agentes que lo soliciten, o al cónsul británico.

3) Las autoridades del Sultán velarán además por que se informe al consulado británico tan pronto como sea posible de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo anterior de este artículo.

4) Asimismo, en el caso de que un buque de Omán se vea forzado a arribar a los territorios de Su Majestad, embarranque o naufrague en las costas de los territorios de Su Majestad o cerca de ellas, o de que una aeronave de Omán caiga o realice un aterrizaje forzoso en los territorios de Su Majestad, las autoridades de esos territorios deberán prestar la misma ayuda y asistencia.

Artículo 13

Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes disfrutarán, en el territorio de la otra, de libertad de conciencia y de tolerancia religiosa, y podrán dedicarse al libre y público ejercicio de todas las formas de religión, siempre que ese ejercicio no lesione o ultraje el sentimiento religioso del país en el que se proponga practicarlas, pero no deberán construir edificios destinados al culto religioso salvo en los lugares determinados para ello por las autoridades locales, y una vez obtenida su aprobación y permiso. Ninguna de las Altas Partes Contratantes hará nada que pueda perturbar los lugares de culto existentes pertenecientes a los nacionales de la otra.

Artículo 14

Todas las disposiciones del presente Tratado en las que se establece que se concederá el mismo trato dado a la nación extranjera más favorecida deberán interpretarse en el sentido de que ese trato deberá concederse inmediata e incondicionalmente.

Artículo 15

1) En el momento del canje de instrumentos de ratificación o en cualquier momento posterior, Su Majestad podrá, a través de su cónsul en Mascate, comunicar su deseo de que el presente Tratado se extienda a cualquiera de los territorios cuyas relaciones internacionales le incumben por mediación de su Gobierno en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a excepción de Kuwait, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah y Kalba, y el Tratado se extenderá a cualquier territorio especificado en tal comunicación desde la fecha en que el Sultán la reciba.

2) En cualquier momento, transcurrido un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor definitiva del presente tratado, cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, previo aviso con 12 meses de anticipación, declarar terminada la aplicación del presente Tratado a cualquiera de los territorios a los que se haya extendido en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 16

1) El presente Tratado estará sujeto a la ratificación de cada una de las Altas Partes Contratantes y los instrumentos de ratificación deberán canjearse en Mascate lo antes posible.

2) El presente Tratado entrará en vigor provisionalmente el 1° de enero de 1952 y, de modo definitivo, en el momento del canje de instrumentos de ratificación.

3) En el caso de que, transcurridos cinco meses desde la fecha de la firma, no se hayan canjeado instrumentos de ratificación, cesará la aplicación provisional de este Tratado.

Artículo 17

1) El presente Tratado estará en vigor por un período de 15 años a partir de la fecha de su entrada en vigor definitiva en la forma prevista en el párrafo 2 del artículo 16. Salvo el caso de que alguna de las Altas Partes Contratantes haya dado a la otra aviso de su terminación un año antes de la expiración del citado período de 15 años, el Tratado permanecerá en vigor hasta transcurrido un año a partir de la fecha en que se dé tal aviso.

2) Todo aviso dado de conformidad con el párrafo 1 de este artículo se aplicará a cualquier territorio con respecto al cual se hayan hecho ratificaciones o extensiones en virtud del artículo 15.

En testimonio de lo cual, el Teniente Coronel Sir William Rupert Hay, K.C.I.E., C.S.I., en nombre de Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar, y el Sultán Said bin Taimur bin Faisal, Sultán de Mascate y Omán y Dependencias, en su propio nombre, han firmado el presente Tratado, poniendo en él sus sellos respectivos.

Hecho por duplicado en Mascate el vigésimo día de diciembre de 1951, correspondiente al vigésimo día de Rabi'ul Awwal del año 1371, en inglés y árabe, haciendo fe el texto inglés en caso de duda.

(Sello) W. R. HAY

(Sello) Said bin TAIMUR

B. CANJE DE CARTAS

I

El Residente Político de Su Majestad en el Golfo Pérsico al Sultán de Mascate y Omán

Consulado Británico, Mascate, 20 de diciembre de 1951

Distinguido y estimado amigo:

Con respecto a nuestras conversaciones y negociaciones sobre el nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que sustituirá el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad el Rey de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar y el Sultán de Mascate y Omán y Dependencias, firmado en Mascate el 5 de febrero de 1939, entiendo que Su Alteza está dispuesto a conceder a Su Majestad el Rey de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar, por un período de diez años a partir del 1° de enero de 1952, jurisdicción extraterritorial en su territorio sobre las personas y en la forma que se indican más adelante.

1) Las autoridades consulares de Su Majestad ejercerán jurisdicción sobre las siguientes personas, a quienes se denominará, a tal efecto, "nacionales de Su Majestad":

- a) Los ciudadanos del Reino Unido y de sus Colonias;
- b) Los ciudadanos de Rhodesia del Sur; y
- c) Los protegidos británicos.

Este párrafo no se aplicará a ninguna de las personas señaladas que sean de religión musulmana.

2) En el ejercicio de las facultades que se les confieren en virtud del párrafo 1) *supra*, las autoridades consulares de Su Majestad, a reserva de cualquier derecho de apelación que pueda disponer Su Majestad, podrán entender y fallar:

- i) En todas las causas criminales contra nacionales de Su Majestad;
- ii) En todas las causas civiles en que sean demandados nacionales de Su Majestad;
- iii) En todos los casos de quiebra en los que el quebrado o la persona cuya quiebra se trate de declarar sea nacional de Su Majestad;
- iv) En todos los procedimientos relacionados con la administración de la herencia de un causante nacional de Su Majestad;
- v) En todas las cuestiones relativas al estatuto personal en las que el interesado sea nacional de Su Majestad.

3) Sobre todos los demás nacionales de cualquier país del Commonwealth británico (ya sean musulmanes o no), salvo los nacionales de la Unión Sudafricana, del Paquistán, de los principados bajo protectorado británico en el Golfo Pérsico, de Zanzibar y de los Estados del Protectorado de Adén, las autoridades consulares de Su Majestad tendrán análoga jurisdicción salvo que no entenderán y fallarán:

- i) En las causas criminales y civiles, inclusive las que se susciten en relación con leyes y reglamentos dictados por el Sultán, en los que el querellante o demandante sea el Gobierno del Sultán o un nacional del Sultán; y
- ii) En los procedimientos de quiebra en que el Sultán decida que entiendan y fallen sus tribunales.

4) En caso de que se falle en contra de un nacional de Su Majestad, definido conforme al párrafo 1 *supra*, por un tribunal de la Sultanía, el Sultán remitirá el caso, si el Cónsul de Su Majestad así lo solicita, a un Tribunal de Apelación cherámico que será designado por el Sultán a tal efecto.

5) Los funcionarios de la Sultanía no detendrán a los nacionales de Su Majestad, definidos conforme al párrafo 1 *supra*, ni secuestrarán sus propiedades, ni allanarán o registrarán sus domicilios, oficinas, almacenes u otros locales, salvo en caso necesario con objeto de evitar un quebrantamiento del orden o la infracción de las leyes y reglamentos de la Sultanía, o en el supuesto de que un delincuente contumaz trate de hallar refugio junto a un nacional de Su Majestad, y, en tal caso, deberá informarse del procedimiento al Cónsul de Su Majestad, a quien habrán de entregarse el nacional de Su Majestad así detenido y los bienes secuestrados con objeto de que incoe el proceso correspondiente, y adopte las demás disposiciones oportunas.

6) A menos que el Sultán decida otra cosa, todas las leyes y reglamentos dictados por el Sultán, que sean aplicables, o lo puedan ser en lo futuro, a nacionales del Sultán y a ciudadanos extranjeros, se aplicarán automáticamente a los nacionales de Su Majestad, definidos conforme al párrafo 1), y a los demás nacionales de cualquier país del Commonwealth británico en los casos en que entiendan las autoridades consulares de Su Majestad en conformidad con el párrafo 3), a reserva de que en el ejercicio de su jurisdicción las autoridades consulares de Su Majestad seguirán el procedimiento establecido en su propio derecho.

7) A petición personal del Sultán, el Cónsul de Su Majestad dispondrá lo necesario, sin retrasos indebidos, para que salga de los territorios del Sultán cualquier persona que éste considere indeseable y que sea nacional de Su Majestad, conforme al párrafo 1), quedando entendido que ninguna de las disposiciones de este párrafo impedirá al Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido formular las reclamaciones pertinentes al Sultán en nombre de cualquiera de esas personas.

8) Todas las multas impuestas por las autoridades consulares de Su Majestad con respecto a infracciones de disposiciones de la Sultanía en materia de aduanas, ordenanzas o pasaportes serán pagaderas al Tesoro de la Sultanía.

9) A los efectos de las disposiciones anteriores se considerará que las personas jurídicas son ciudadanos o nacionales del territorio bajo cuya ley fueron creadas.

Agradecería a Su Alteza que tuviese a bien confirmar que mi interpretación es correcta con objeto de que pueda informar a Su Majestad en consecuencia.

Desco expresar la alta estima que siento por Su Alteza y le ruego me considere su sincero amigo.

(Firmado) W. R. HAY

II

El Sultán de Mascate y Omán al Residente Político de Su Majestad en el Golfo Pérsico

Mascate, 20 de diciembre de 1951

Después de saludar a V. E., le comunicamos que hemos recibido su carta de fecha de hoy acerca de la jurisdicción extra-territorial y confirmamos que su interpretación es correcta. Vuestra Excelencia puede informar a Su Majestad el Rey en consecuencia.

Le saluda su sincero amigo,

(Firmado) Said bin TAIMUR

C. CANJE DE CARTAS ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL SULTÁN DE MASCATE Y OMÁN ACERCA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL SULTÁN, LA AVIACIÓN CIVIL, LAS INSTALACIONES DE LA REAL FUERZA AÉREA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN MASCATE Y OMÁN

[Londres, 25 de julio de 1958]

I

El Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores al Sultán de Mascate y Omán

Foreign Office, S.W.1

25 de julio de 1958

Distinguido y estimado amigo:

Con referencia a las conversaciones que he tenido el placer de celebrar con Su Alteza en Londres y como continuación de las que tuvieron lugar en Mascate entre Su Alteza y el señor Julian Amery en enero de 1958, tengo el honor de exponer a continuación cómo entiendo el acuerdo concertado entre nosotros.

Visto el interés común de Su Alteza y del Gobierno de Su Majestad en promover el progreso de la Sultanía de Mascate y Omán, el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido ha convenido en prestar asistencia para reforzar al ejército de Su Alteza. El Gobierno de Su Majestad, a petición de Su Alteza, pondrá a su disposición oficiales del ejército regular en excedencia que, mientras sirvan en la Sultanía, pasarán a ser parte integrante de las fuerzas armadas de Su Alteza. Se han convenido con Su Alteza las condiciones de servicio de esos oficiales británicos. El Gobierno de Su Majestad también proporcionará medios de instrucción militar para los miembros de las fuerzas armadas de Su Alteza y asesorará, según lo requiera Su Alteza, en problemas de instrucción militar y otras materias.

El Gobierno de Su Majestad también ayudará a Su Alteza a crear una fuerza aérea que forme parte integrante de las fuerzas armadas de Su Alteza, y proporcionará personal para esa fuerza aérea.

Su Alteza ha aprobado la celebración de un acuerdo para la prórroga de las actuales disposiciones relativas a la aviación civil y la utilización de los aeródromos de Salalah y Masi-rah por la Real Fuerza Aérea.

También hemos tratado sobre problemas económicos y de desarrollo de la Sultanía, y el Gobierno de Su Majestad ha convenido en ayudar a Su Alteza a llevar a cabo un programa de desarrollo civil que comprenderá la mejora de caminos, servicios médicos y de enseñanza y un programa de investigación agrícola.

En caso de que Su Alteza convenga en que cuanto antecede responde correctamente al acuerdo concertado entre nosotros tengo el honor de sugerir que la presente carta y la respuesta de Su Alteza se consideren como Acuerdo entre Su Alteza y mi Gobierno.

Le ruego que me considere sincero amigo de Su Alteza y le reitero el testimonio de mi más alta consideración.

(Firmado) Selwyn LLOYD

II

Londres, 25 de julio de 1958

Excelentísimo señor:

Hemos recibido la carta de V. E. de fecha de hoy, en la que expone el acuerdo concertado en diversas conversaciones entre nosotros y el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido, y confirmamos que su carta y la presente respuesta deben considerarse como Acuerdo entre nosotros y su Gobierno.

Su sincero amigo,

(Firmado) Said bin TAIMUR

ANEXO II

Acuerdos entre los Principados bajo Tregua y el Reino Unido

ACUERDO EXCLUSIVO ENTRE EL JEFE DE ABU DHABI CON EL GOBIERNO BRITÁNICO, DE 6 DE MARZO DE 1892

Yo, Zaeed bin Khalifah, Jefe de Abu Dhabi, en presencia del Teniente Coronel A. C. Talbot, C.I.E., Residente Político en el Golfo Pérsico, me obligo solemnemente por el presente documento, en mi nombre y en el de mis herederos y sucesores, a aceptar las siguientes condiciones:

1a. No concertaré en ningún caso acuerdo alguno ni mantendré correspondencia con ninguna Potencia distinta del Gobierno británico.

2a. Sin el asentimiento del Gobierno británico no consentiré dentro de mi territorio la residencia de agentes de cualquier otro gobierno.

3a. En ningún caso cederé, venderé, hipotecaré o daré para su ocupación de cualquier otro modo parte alguna de mi territorio, salvo al Gobierno británico.

Fechado en Abu Dhabi el 6 de marzo de 1892, correspondiente al 5 del mes de Shaaban del año 1309 de la Hégira.

Firma de Zaeed bin KHALIFAH
Jefe de Abu Dhabi

A. C. TALBOT, Teniente Coronel
Residente en el Golfo Pérsico

LANDSDOWNE,
Virrey y Gobernador General
de la India

Ratificado por Su Excelencia el Virrey y Gobernador General de la India en Simla, el día 12 de mayo de 1892.

H. M. DURAND
Secretario del Gobierno de
la India,
Departamento Exterior

(Los acuerdos firmados por los otros Jefes de los Principados bajo Tregua, a saber los Jefes de Dubai, Ajman, Sharjah, Ras al Khaima y Umm al Qaiwain, los tres primeros de fecha 7 de marzo de 1892 y los dos últimos de 8 de marzo de 1892, tienen forma idéntica.)

ACUERDO PARA LA PROHIBICIÓN DEL TRÁFICO DE ARMAS, 1902

Los infrascritos, Jefes de los Principados bajo Tregua, convenimos en prohibir terminantemente la importación de armas para su venta en nuestros respectivos territorios o la exportación desde ellos, y con objeto de aplicar este acuerdo hemos cursado la correspondiente notificación a todos los interesados.

Maktoom bin HASHAR (Dubai)
Sagar bin KHALED (Sarjah)
Rashid bin AHMED (Umm al Qaiwain)
Abdul Aziz bin HOMAID (Ajman)
Zaeed bin KHALIFAH (Abu Dhabi)

Firmado y sellado en mi presencia a bordo de la motonave "Lawrence" los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1902.

C. A. KEMBALL, Teniente Coronel
Residente Político en funciones, Golfo Pérsico

COMPROMISO DEL JEQUE DE SHARJAH SOBRE EL PETRÓLEO, 1922

Carta del Jeque Khaled ben Ahmed, Jefe de Shartjah, al Honorable Teniente Coronel A. P. Trevor, C.S.I., C.I.E., Residente Político, Golfo Pérsico, Bushire, de fecha 18 de Jumada-as-Sani de 1340 (17 de febrero de 1922)

Después de saludar a Ud., le comunico que el objeto de la presente carta de amistad es transmitirle mis saludos y saber de su salud.

En segundo lugar, quiero dejar bien sentado que escribo esta carta libremente y que, en caso de descubrirse algún yacimiento de petróleo en mi territorio, me comprometo ante Ud. a no otorgar concesión para la explotación del mismo a extranjeros, sino a la persona que designe el Gobierno británico.

Así conste.

NOTA. Un compromiso análogo fue firmado por el Jefe de Ras al Khaimah el 22 de febrero de 1922.

COMPROMISO DEL JEQUE DE DUBAI SOBRE EL PETRÓLEO, 1922

Carta del Jeque Saeed ben Maktoom, Jefe de Dubai, al Teniente Coronel A. P. Trevor, C.S.I., C.I.E., Residente Político, Golfo Pérsico, de fecha 4 de Ramadán de 1340 (2 de mayo de 1922)

Después de saludar a Ud., le comunicamos que, en caso de descubrirse petróleo en nuestro territorio, convenimos en no otorgar concesión para su explotación sino a la persona que designe el Gobierno británico.

NOTA. Compromisos de contenido análogo fueron firmados por los siguientes jefes en las fechas que se consignan:

Jeque de Abu Dhabi 3 de mayo de 1922
Jeque de Ajman 4 de mayo de 1922
Jeque de Umm al Qaiwain .. 8 de mayo de 1922

CAPÍTULO XIV*

ISLA MAURICIO, ISLAS SEYCHELLES Y SANTA ELENA

A. ACTUACIÓN ANTERIOR DEL COMITÉ ESPECIAL Y DE LA ASAMBLEA GENERAL

1. Después de examinar la cuestión de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena durante sus reuniones de 1964, el Comité Especial aprobó algunas conclusiones y recomendaciones que están incluidas en el informe presentado a la Asamblea General durante su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. XIV, párrs. 154 a 159). El Comité Espe-

cial incluyó información pertinente sobre los Territorios en su informe a la Asamblea durante su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1², cap. XIII).

2. La Asamblea General, en su vigésimo período de sesiones, aprobó dos resoluciones, una respecto de la Isla Mauricio (resolución 2066 (XX), de 16 de diciembre de 1965) y la otra relativa a varios territorios más pequeños, incluidas las Islas Seychelles y Santa Elena (resolución 2069 (XX), de 16 de diciembre de 1965).

3. Los párrafos dispositivos de la resolución 2066 (XX) sobre la Isla Mauricio dicen así:

*Ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

“[La Asamblea General]

“1. *Aprueba* los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales relativos al Territorio de la Isla Mauricio, y hace suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial que contienen;

“2. *Reafirma* el derecho inalienable del pueblo del Territorio de la Isla Mauricio a la libertad y a la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

“3. *Invita* al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a adoptar medidas eficaces para dar cumplimiento inmediato y completo a la resolución 1514 (XV);

“4. *Invita* a la Potencia Administradora a no adoptar ninguna medida que pudiera desmembrar el Territorio de la Isla Mauricio y violar su integridad territorial;

“5. *Invita además* a la Potencia Administradora a informar al Comité Especial y a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente resolución;

“6. *Pide* al Comité Especial que mantenga en estudio la cuestión del Territorio de la Isla Mauricio, e informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.”

4. Los párrafos dispositivos de la resolución 2069 (XX) sobre las Islas Seychelles y Santa Elena, entre otros Territorios, dicen así:

“[La Asamblea General]

“1. *Aprueba* los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a esos Territorios y hace suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuran;

“2. *Pide encarecidamente* a las Potencias administradoras que pongan en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

“3. *Pide asimismo* a las Potencias administradoras que permitan a las misiones de las Naciones Unidas visitar los Territorios y les ofrezcan toda su cooperación y asistencia;

“4. *Reafirma* que los pueblos de esos Territorios tienen el derecho inalienable de determinar su situación constitucional de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) y en las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

“5. *Decide* que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos Territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación;

“6. *Pide* al Comité Especial que examine la situación de esos Territorios e informe a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

“7. *Pide* al Secretario General que preste toda la ayuda necesaria para el cumplimiento de la presente resolución.”

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS³

5. La información sobre la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena figura en los informes del Comité Especial a la Asamblea General durante sus decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XIV y A/6000/Rev.1, cap. XIII). A continuación se ofrece información adicional.

I. Isla Mauricio

Generalidades

6. Hasta el 8 de noviembre de 1965 el Territorio de la Isla Mauricio estaba formado por la Isla Mauricio y sus dependencias, Rodrigues, el Archipiélago Chagos, Agalega y las Islas Cargados Carajos. A partir de esa fecha el Archipiélago Chagos pasó a formar parte de un nuevo territorio, creado por el Gobierno del Reino Unido, que se conoce con el nombre de Territorio Británico del Océano Indico (véase párrs. 41 a 53 *infra*).

7. La población total de la Isla Mauricio a fines de 1965, excluidas las dependencias, se calculaba en 751.421 habitantes. Desde el punto de vista racial esa población se divide en población general — europeos (principalmente franceses), africanos y personas de origen mixto —, 220.093; indomauricios (inmigrantes del subcontinente indio y sus descendientes), 506.552 (de los cuales 383.542 eran hindúes y 123.010 musulmanes); y chinos (inmigrantes provenientes de la China y sus descendientes), 24.776.

8. Con un promedio de más de 1.000 habitantes por milla cuadrada, Mauricio es ya una de las regiones agrícolas más densamente pobladas del mundo. Una elevada tasa de natalidad y una tasa de mortalidad decreciente están dando por resultado un aumento de aproximadamente el 30 por 1.000 anual. El crecimiento de la población ha hecho descender el nivel de vida en algunos sectores de la población, y aumentar el desempleo.

Evolución política y constitucional

Conferencia Constitucional de 1965

9. La decisión de que la Isla Mauricio se convirtiera en un Estado independiente probablemente a fines de 1966, después de un período de seis meses de pleno gobierno propio interno, fue anunciada por el Sr. Anthony Greenwood, Secretario de Estado para las Colonias, al finalizar una Conferencia Constitucional celebrada en Londres del 7 al 24 de septiembre de 1965.

10. Asistieron a la Conferencia representantes de todos los partidos políticos representados en la Legislatura de la Isla Mauricio, a saber: el Mauritius Labour Party (MLP), cuyo líder es el Primer Ministro, Sir Seenoosagur Ramgoolam; el Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD), cuyo líder es el Sr. J. Koenig; el Independent Forward Bloc (IFB), cuyo líder es el Sr. S. Bissoondoyal; el Muslim Committee of Action (MCA), cuyo líder es el Sr. A. R. Mohamed, y dos miembros independientes de la Legislatura, los Sres. J. M. Patu-
rau y J. Ah Chuen.

³ Esta sección se basa en: a) información extraída por la Secretaría de fuentes publicadas y b) información transmitida por el Reino Unido en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta (para el año que finaliza el 31 de diciembre de 1964) el 26 de julio de 1965 para la Isla Mauricio, el 23 de junio de 1965 para las Islas Seychelles y el 28 de julio de 1965 para Santa Elena.

11. El MLP, partido de la clase trabajadora, que en las elecciones generales de octubre de 1963 obtuvo 19 de los 40 escaños electivos de la Legislatura, representa principalmente a las comunidades indomauricia y créole (afroeuropa). La mayor parte de los indomauricios que apoyan a este partido son hindúes, a los cuales se suman algunos musulmanes. La mayoría de los musulmanes, sin embargo, pertenecen al MCA, que en la última elección obtuvo 4 asientos y se mantuvo como aliado del MLP. El PMSD, que obtuvo 8 asientos, representa tradicionalmente a la clase de los terratenientes francomauricios y a la clase media *créole*. A la izquierda del MLP se sitúa el IFB, partido rural indomauricio que obtuvo 7 asientos.

12. Según informes, el PMSD se retiró de la Conferencia el 23 de septiembre de 1965 y no asistió a la sesión plenaria final. Su líder, el Sr. J. Koenig, dijo que se había comunicado al Sr. Greenwood que el partido no volvería a la Conferencia hasta que hubiera adoptado su decisión sobre dos puntos vitales respecto de los cuales había insistido siempre. Estos puntos eran los siguientes: que el Gobierno del Reino Unido debía acordar en primer término el derecho de los mauricios a un referéndum sobre si deseaban la independencia o una forma de libre asociación con el Reino Unido y, en segundo lugar, alguna forma de representación proporcional para asegurar la representación de las minorías legislativas en una proporción aproximada a su número.

13. A falta de acuerdo unánime entre los partidos mauricios, las decisiones del Gobierno del Reino Unido sobre el futuro del Territorio fueron anunciadas por el Sr. Greenwood en la sesión plenaria final. Esas decisiones quedaron consignadas en un informe sobre la Conferencia⁴, del que se da a continuación un resumen.

Status futuro

14. Los debates más importantes de la Conferencia se produjeron entre quienes defendían la independencia y quienes proponían una asociación permanente con el Reino Unido, como *status* definitivo para la Isla Mauricio. Se dedicó también mucho tiempo a la cuestión de si el progreso hacia este *status* definitivo debía ser precedido por consultas con el pueblo y, en ese caso, en qué forma se realizarían ellas. Todos los partidos consideraron que en el futuro la Isla Mauricio debía permanecer dentro del Commonwealth, con la Reina como Cabeza del Estado. Pero, entre la independencia y alguna forma de asociación permanente con el Reino Unido, mantuvieron sus opiniones opuestas.

15. El MLP y el IFB apoyaban la independencia, y el MCA estaba también dispuesto a hacerlo, con la condición de que se concedieran ciertas garantías electorales a la comunidad musulmana. En cambio, el PMSD proponía un vínculo permanente con el Reino Unido (aunque sin descartar la posibilidad de una independencia eventual) y pedía un referéndum para que el pueblo pudiera elegir entre la independencia y la asociación. Otras opiniones, formuladas por representantes de sectores independientes en la Legislatura, incluían el argumento de que la Isla Mauricio era demasiado pequeña, aislada y económicamente vulnerable para poder sobrevivir como una unidad viable.

16. El informe sobre la Conferencia expresaba que el Gobierno del Reino Unido, enfrentado con estas opiniones contradictorias, tenía que adoptar una decisión sin poder contar con el asesoramiento unánime de los partidos representados en la Conferencia. Después de un cuidadoso estudio de todos los problemas, el Secretario de Estado declaró que "era justo que la Isla Mauricio fuera independiente y ocupara su lugar entre las naciones soberanas del mundo". Rechazó la propuesta de un referéndum basándose en que el efecto principal sería "prolongar la actual incertidumbre y la controversia política en una forma que no podría sino dar más rigidez y profundidad a las divisiones y rivalidades de comunidades". Se sentía seguro de que "sería posible elaborar una constitución que recibiera el apoyo y el respeto de todos los partidos y de todos los sectores de la población".

17. Al expresar estas opiniones a la Conferencia, el Secretario de Estado dijo que cuando la Comisión Electoral (véase más adelante) hubiera presentado su informe, se fijaría una fecha para una elección general que se realizaría en virtud del nuevo sistema, y se formaría un nuevo gobierno. En consulta con este gobierno, el Reino Unido estaría dispuesto a establecer una fecha y adoptar las medidas necesarias para declarar la independencia de la Isla Mauricio, después de un período de seis meses de pleno gobierno propio interno, si la nueva Asamblea lo pidiera en una resolución aprobada por simple mayoría. El Gobierno del Reino Unido esperaba que esas actuaciones pudieran estar terminadas antes de fines de 1966.

Marco general de la Constitución

18. Durante los debates, la Conferencia reconoció que había varios asuntos sobre los cuales podían incluirse en la Constitución de la Isla Mauricio disposiciones que no serían afectadas por la decisión sobre el *status* definitivo. Sobre la mayor parte de estas cuestiones se logró un amplio acuerdo, y se dio a los delegados el texto de un marco general para la Constitución que incluía los puntos de acuerdo.

19. Entre los temas incluidos en ese texto figuraban: disposiciones para la defensa de los derechos humanos fundamentales; para asegurar la imparcialidad permanente del sistema judicial y de las comisiones encargadas de la administración pública, el servicio jurídico y judicial y el servicio de policía; y para lo relativo a los juicios criminales y el ejercicio de la prerrogativa de clemencia. Una salvaguardia adicional contra cualquier posibilidad de abuso del poder figuraba en la disposición sobre nombramiento de un *Ombudsman* que tendría una amplia jurisdicción para investigar las quejas contra determinados órganos y funcionarios públicos.

20. El marco general para la Constitución establecía también disposiciones para el nombramiento de un representante de la Reina, el cual, en el ejercicio de sus funciones, actuaría en general con el asesoramiento de un Consejo de Ministros formado por un Ministro Jefe y no más de otros catorce Ministros colectivamente responsables ante una Asamblea Legislativa totalmente electiva.

21. Las enmiendas a la Constitución requerían el apoyo de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Asamblea Legislativa o, en el caso de disposiciones fundamentales, no menos de las tres cuartas partes de los miembros.

⁴ *Mauritius Constitutional Conference, 1965*, Cmnd. 2797 (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1965).

Comisión Electoral

22. Otro tema sobre el cual no se pudo lograr acuerdo en la Conferencia fue el sistema electoral que había de adoptarse conforme a la Constitución que estableciera el Gobierno propio. El Secretario de Estado se manifestó renuente a decidir un asunto tan importante sin nuevas consultas, y por lo tanto propuso la designación de una Comisión Electoral para que hiciera recomendaciones sobre el método más apropiado para asignar los escaños del cuerpo legislativo de la Isla Mauricio y sobre los límites de las circunscripciones electorales.

23. Se pediría a la Comisión que, al formular sus recomendaciones, aceptara ciertos principios, a saber: que el sistema recomendado estuviera basado fundamentalmente en circunscripciones de representación multipersonal; que hubiera una lista electoral común, con disposiciones, en caso necesario mediante la reserva de asientos, para una representación justa de los principales sectores de la población; que no se alentara la multiplicación de pequeños partidos; que no hubiera miembros designados en el cuerpo legislativo; y que se diera representación a la Isla Rodrigues. La Comisión, formada por un Presidente (Sir Harold Banwell) y otros dos miembros (el Profesor Colin Leys y el Sr. T. G. Randall), visitó la Isla Mauricio en el mes de enero de 1966.

24. En su informe⁵, que presentó al Secretario de Estado para su examen el 22 de febrero de 1966, la Comisión declaró que al formular sus propuestas para un sistema electoral había tenido en cuenta las opiniones manifestadas por particulares y por organizaciones, incluidos los cuatro partidos políticos principales, y los principios orientadores establecidos en el informe de la Conferencia Constitucional de 1965.

25. Con arreglo al sistema propuesto, se elegirían en la Isla Mauricio sesenta diputados por votación en bloque (cada elector habría de emitir sus tres votos), distribuidos en veinte circunscripciones electorales de tres diputados cada una, y se elegirían otros dos diputados en Rodrigues (la principal dependencia de Mauricio) por votación en bloque en una sola circunscripción electoral. Los diputados elegidos por Rodrigues representarían también los intereses de las dos dependencias menores, o sea Cargados Carajos y Agalega.

26. Como factor de compensación permanente habría cinco puestos más, que se cubrirían por turno con aquellos de los candidatos no elegidos que hubiesen obtenido el mayor número de votos y perteneciesen a los grupos que hubiesen conseguido en las elecciones una representación menor. Por este procedimiento un partido sólo obtendría un puesto si se hubiese elegido a uno de sus miembros por elección directa y si hubiera obtenido el 10% del total de los votos emitidos.

27. Se tomarían disposiciones para establecer un sistema de compensación variable. Con arreglo a este sistema se aumentaría proporcionalmente la representación de todo partido que hubiese recibido más del 25% de los votos, pero menos del 25% de los puestos.

28. La Comisión recomendó también que se enviaran observadores independientes de países del Commonwealth a la Isla Mauricio durante la preparación de las próximas listas electorales y de las elecciones

ulteriores, y que se constituyese una comisión electoral independiente compuesta de tres miembros.

29. En un despacho de 28 de mayo de 1966 dirigido al Gobernador de la Isla Mauricio, el Secretario de Estado para las Colonias declaró que, después de haber estudiado atentamente las recomendaciones hechas en el informe de la Comisión Banwell, había llegado a la conclusión de que el sistema electoral propuesto, en su conjunto, se ajustaba enteramente a los principios básicos establecidos en el informe de la conferencia constitucional de Mauricio de 1965, y que ese sistema era "todo lo equitativo y satisfactorio que cabía idear en la especial situación de Mauricio". Por consiguiente, había decidido aceptar todas las recomendaciones de la Comisión y tenía gran confianza en que todos los partidos políticos, en interés de la Isla Mauricio, aceptarían de buena gana el sistema propuesto y colaborarían en su ejecución de modo que pudiese llevarse adelante la planificación de los trámites necesarios para que las elecciones se celebraran a finales de 1966.

30. El Secretario de Estado declaró también que, dada la situación de la Isla Mauricio, era evidentemente apropiado enviar un grupo de observadores de los países del Commonwealth, según recomendaba la Comisión, y añadió que estaba tomando con urgencia las disposiciones necesarias a fin de elegir personas con las calificaciones precisas para hacerse cargo de esa misión. Por último, pidió al Gobernador que se ocupase de que el informe de la Comisión y su propio despacho se publicaran en Mauricio lo antes posible.

31. En el curso de cuatro semanas aproximadamente después de su publicación, el informe de la Comisión suscitó controversias en la Isla Mauricio, especialmente entre los tres partidos que participaban en el gobierno actual (es decir el MLP, el JFB y el MCA) y el partido de la oposición, PMSD. Según se informa, los tres primeros organizaron el Pro-Independence Front dirigido por el Primer Ministro a fin de protestar contra el sistema electoral propuesto por la Comisión. Con arreglo a los informes recibidos, la causa principal de protesta era que en el sistema propuesto no se establecía el gobierno de la mayoría ni se daba una representación directa adecuada a las comunidades musulmana y china. En cambio, se dijo que el PMSD era favorable al sistema propuesto por la Comisión, especialmente porque estimaba que este sistema era muy semejante al de representación proporcional y no se basaba en la distribución por comunidades. Ambas partes hicieron acusaciones y contraacusaciones y organizaron grandes reuniones políticas en las que se adoptaron resoluciones de apoyo a las posiciones respectivas.

32. El 16 de junio de 1966 la Asamblea Legislativa aprobó por una inmensa mayoría una moción presentada por el Primer Ministro en la que se pedía que se estudiaran nuevamente las propuestas del informe Banwell. Una enmienda de la oposición tendiente a que se adoptara ese informe quedó rechazada por gran mayoría. El 27 de junio de 1966 el Sr. John Stonehouse, Subsecretario Parlamentario para las Colonias, empezó una visita de ocho días a la Isla Mauricio para deliberar con representantes de los cuatro partidos principales sobre las propuestas Banwell. Como resultado se introdujeron, de pleno acuerdo, ciertas modificaciones en las propuestas.

33. Esas modificaciones, aprobadas más tarde por el Secretario de Estado, son las siguientes:

⁵ *Mauritius: Report of the Banwell Commission on the Electoral System*, Colonial No. 362 (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1966).

34. Se conserva íntegro el sistema propuesto por la Comisión Banwell para las circunscripciones electorales, pero se han introducido modificaciones en los sistemas de compensación recomendados por la Comisión. Se prescinde del factor de compensación variable. El factor constante se sustituye por la asignación de ocho puestos para los candidatos no elegidos que hayan obtenido el mayor número de votos. Los partidos o alianzas de partidos podrán aspirar a esos puestos si se han inscrito ante el Comisario Electoral antes del día de la presentación de candidaturas. Se suprime el requisito de que un partido deba alcanzar un mínimo de votos en las elecciones para tener derecho a los puestos previstos como factor compensador constante y no se adopta ninguna disposición equivalente respecto de los puestos asignados a los candidatos no elegidos que hayan obtenido el mayor número de votos.

35. Los cuatro primeros puestos de esa categoría se reservan para las comunidades que hayan quedado insuficientemente representadas en la Asamblea Legislativa como resultado de las elecciones por circunscripción. Esos cuatro puestos se asignarán sin tener en cuenta el partido a que pertenezcan los candidatos. Los cuatro puestos restantes se asignarán teniendo en cuenta el partido y la comunidad.

36. Con la aplicación de ese sistema de reserva de ocho puestos se contribuirá, en general, a que toda comunidad pueda obtener un número equitativo de puestos en la Asamblea Legislativa asignándole algunos de los puestos reservados con ese fin, y mantener la posición del partido o alianza de partidos que haya obtenido la mayoría en las elecciones por circunscripción.

37. El 4 de julio de 1966, antes de su salida para Londres, el Sr. Stonehouse dijo que las elecciones generales basadas en las propuestas revisadas de la Comisión Banwell debían celebrarse lo antes posible, pero que en ese momento todavía no se podía fijar la fecha en que la Isla Mauricio obtendría el pleno goce del gobierno propio interno.

Participación en el Commonwealth

38. Sobre la cuestión de formar parte del Commonwealth, el Secretario de Estado aclaró que se trataba de un asunto que debía ser decidido no solamente por el Gobierno del Reino Unido, sino por los miembros del Commonwealth en su totalidad. Señaló, sin embargo, que a su Gobierno le resultaría grato, si el deseo de formar parte del Commonwealth fuera confirmado por una resolución del cuerpo legislativo de la Isla Mauricio elegido antes de la independencia, transmitir dicho pedido a los demás gobiernos del Commonwealth.

39. El Secretario de Estado creía que el logro de la independencia por el Territorio robustecería las estrechas y amistosas relaciones que habían existido entre la Isla Mauricio y el Reino Unido por más de siglo y medio. La Isla Mauricio seguiría en condiciones de recibir asistencia económica del Reino Unido en la misma forma en que otros territorios antes dependientes y continuaría beneficiándose del Acuerdo del Commonwealth sobre el Azúcar.

Defensa

40. En la sesión plenaria final de la Conferencia, el Secretario de Estado señaló que su Gobierno había estudiado cuidadosamente las opiniones expresadas sobre

la conveniencia de celebrar un acuerdo defensivo entre los Gobiernos de la Isla Mauricio y del Reino Unido. Anunció que su Gobierno estaba dispuesto en principio a negociar con el Gobierno de la Isla Mauricio, antes de la independencia, los términos de un acuerdo defensivo que sería firmado y entraría en vigencia inmediatamente después de dicha independencia. El Gobierno del Reino Unido contemplaba la posibilidad de que dicho acuerdo dispusiera que, en el caso de una amenaza exterior contra cualquiera de los países, los dos Gobiernos realizarían consultas para decidir qué medidas serían necesarias para la defensa mutua. También se celebrarían consultas sobre cualquier solicitud del Gobierno de Mauricio en caso de una amenaza a la seguridad interna de la Isla. El acuerdo contendría disposiciones en virtud de las cuales, por una parte, el Gobierno del Reino Unido se encargaría de prestar asistencia para el suministro de capacitación y para la asignación de personal capacitado para las fuerzas policiales y de seguridad de la Isla Mauricio; y, por otra parte, el Gobierno de la Isla Mauricio prestaría su acuerdo para que el Reino Unido continuara disfrutando de los derechos y servicios existentes en la HMS Mauritius (una estación de radiotelegrafía) y en el aeropuerto de Plaisance.

Territorio Británico del Océano Indico

41. El 10 de noviembre de 1965, en respuesta a una pregunta formulada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Secretario de Estado para las Colonias declaró por escrito que:

"Con el acuerdo del Gobierno de las Islas Mauricio y Seychelles, se hicieron nuevos arreglos para la administración de ciertas islas del Océano Indico por *Order-in-Council* (Real Decreto) de 8 de noviembre *The British Indian Ocean Territory Order 1965, Statutory Instruments 1965, No. 1920*). Se trata de las islas Chagos, unas 1.200 millas al noreste de la Isla Mauricio, y Aldabra, Farquhar y Desroches en el Océano Indico occidental. Sus poblaciones son de aproximadamente 1.000, 100, 172 y 112 habitantes respectivamente. Las Islas Chagos estaban administradas anteriormente por el Gobierno de la Isla Mauricio y las otras tres islas por el de las Islas Seychelles. Las islas se denominarán Territorio británico del Océano Indico y serán administradas por un Comisionado. Se tiene intención de poner las islas a disposición de los Gobiernos de Gran Bretaña y los Estados Unidos para la construcción de instalaciones de defensa, pero hasta ahora ninguno de los dos Gobiernos ha hecho planes en firme. Se pagarán las compensaciones apropiadas."

42. Posteriormente se anunció que el primer Comisionado del Territorio sería Lord Oxford y Asquith, Gobernador y Comandante en Jefe de las Islas Seychelles, y que el nuevo cargo se agregaría al de Gobernador de Seychelles.

43. Según los informes, el nuevo Territorio podría convertirse en una base estratégica para un nuevo sistema de seguridad angloamericano al este de Suez. Aunque no existían planes concretos, la intención era utilizar a Diego García, la Isla más grande del Archipiélago de Chagos (de una longitud de 13 millas, una anchura de 4 millas y una población de 500 habitantes aproximadamente), como centro de comunicaciones y base de reabastecimiento de combustible, una vez ter-

minados los preparativos necesarios. Las instalaciones de la Isla podían ampliarse hasta constituir una base de tránsito, aunque no se planeaba tal cosa por el momento. Se incluían las otras islas teniendo en cuenta posibles necesidades futuras.

44. Según se comunicaba, se había mantenido informados a varios otros países. Entre éstos se contaban Australia y Nueva Zelanda, que se suponía tendrían interés en bases de tránsito posibles para el transporte aéreo y marítimo a través del Océano Indico entre el Mar Rojo y las Islas Cocos (Keeling) (actualmente administradas por Australia).

45. Según los informes, la compensación que se pagaría al Gobierno de Mauricio sería de unos 3 millones de libras en el caso de las Islas Chagos.

46. En la Isla Mauricio, los tres Ministros del Parti Mauricien Social Démocrate renunciaron a sus cargos en el Gobierno el 12 de noviembre de 1965, como protesta contra el plan del Gobierno del Reino Unido de separar las Islas Chagos de la Isla Mauricio con el propósito de establecer una base militar angloamericana. Dichos Ministros, cuyas respectivas carteras fueron posteriormente dadas a otras tres personas (una del Independent Forward Bloc y dos del Muslim Committee of Action), eran el Sr. J. Koenig (Procurador General), líder del partido; Sr. G. Duval (Ministro de Vivienda, Tierras y Planificación Urbana y Rural), líder adjunto; y el Sr. R. Devienne (Ministro de Desarrollo del Estado), Presidente del partido. Se dijo que uno de ellos (el Sr. Duval) había enviado un cablegrama al Primer Ministro de la India agradeciéndole la oposición de su país a la base que se planeaba. Según ha informado la Potencia Administradora, los tres Ministros anunciaron en noviembre de 1965, en una conferencia de prensa, que no se oponían a la separación de las Islas Chagos de la Isla Mauricio para la defensa de Occidente, sino sólo a los términos y condiciones de esa separación.

47. Se dijo que el descontento entre los habitantes de la Isla Mauricio por el plan mencionado iba en aumento. El 16 de noviembre de 1965, opositores a este plan perturbaron el desarrollo de una ceremonia del Remembrance Day celebrada en Curepipe. Varios miles de ellos, enarbolando banderas francesas, indias y pakistanas, concurren a un mítin en Puerto Luis el 5 de diciembre de 1965, durante el cual se aprobó una resolución por la que se denunciaba al Reino Unido.

48. El 2 de febrero de 1966, el referido plan fue objeto de un debate en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Durante este debate, el Secretario de Estado de Defensa declaró que su Gobierno no se proponía hacer ninguna modificación a este plan luego de la aprobación por la Asamblea General de la resolución 2066 (XX) del 16 de diciembre de 1965.

49. Se preguntó al Secretario si el establecimiento de bases militares en cualquier parte, fuera de las islas mencionadas en la resolución, encontraría dificultades políticas y si, en consecuencia, debían estudiarse otras posibilidades. El Secretario replicó: "No pensamos que en la resolución se trate el problema en forma realista... Hemos tomado ciertas medidas que, en nuestra opinión, son acertadas, teniendo en cuenta que no nos es posible prever cuáles podrían ser las futuras necesidades de defensa en esa zona."

50. Con respecto a la naturaleza, propósito y costo de las instalaciones de defensa que habrán de construir-

se en el Territorio británico del Océano Indico, el Secretario dijo:

"Ni el Gobierno de Su Majestad ni, según tengo entendido, el Gobierno de los Estados Unidos, tienen hasta ahora ningún plan concreto para la construcción de instalaciones militares en ninguna de esas islas. Por supuesto, hay una serie de usos militares para los que podrían servir las islas en su oportunidad, siempre que se presenten necesidades específicas, y esta fue la razón de que se estableciese el Territorio británico del Océano Indico."

51. Con respecto a la cuestión de la proporción en que el costo de cualquier instalación de defensa en el Territorio sería compartido entre el Reino Unido y los Estados Unidos, el Secretario de Estado dijo que cada país pagaría las instalaciones en que tuviese interés primordial, y que ambos países podrían utilizar todas las instalaciones sin cargo.

52. Se le pidió también que informase hasta qué punto esta participación común en las instalaciones y los gastos de defensa en el Lejano Oriente significaban una integración de la política de defensa del Reino Unido con la de los Estados Unidos, y que diera seguridades de que no era política del Gobierno del Reino Unido el reprimir revoluciones en otros países. En respuesta, el Ministro afirmó: "Hemos tenido una larga y feliz experiencia en este tipo de cooperación militar con los Estados Unidos".

53. En la reunión parlamentaria del Partido Laborista británico celebrada el 15 de junio de 1966 se rechazó por 225 votos contra 54 una moción presentada por los adversarios del Primer Ministro en la que se pedía una disminución radical de los compromisos militares del Reino Unido al este de Suez para 1969-1970. El Sr. Wilson atacó la moción declarando que "si creemos en el mantenimiento de la paz por medio de las Naciones Unidas y en nuestra contribución a esa misión, hemos de estar presentes allí donde pueda haber problemas o estar en condiciones de llegar rápidamente dondequiera que sea necesario"; afirmó asimismo que el Reino Unido no podía desatender el deseo de sus aliados de que estuviese en condiciones de ejercer influencia en Asia y en África con objeto de "neutralizar los puntos donde haya o pueda haber disturbios". El Sr. Wilson añadió: "Lo que queremos suprimir dondequiera que sea posible es el sistema de grandes bases en zonas pobladas. Lo que necesitamos en realidad son puestos de vigilancia como aquellos de los que disponemos en el Océano Indico, que prácticamente no tienen población local y que en cambio nos permitirán dirigirnos rápidamente a donde sea necesario con un costo mínimo".

Condiciones económicas

54. La Isla Mauricio es primordialmente un país agrícola. En 1960 sufrió un severo revés económico como consecuencia de los ciclones. Desde entonces, la economía ha hecho considerables progresos.

55. El producto nacional bruto en 1963 se estimó en 926 millones de rupias (69 millones de libras esterlinas), la cifra más elevada desde los 542 millones de rupias registrados para 1960. En 1964 (último año para el que se dispone de estadísticas sobre el ingreso) descendió la producción total de las industrias agrícolas y manufactureras. Esas industrias contribuyeron con un 24% y un 15% respectivamente al producto nacional

bruto, y el resto correspondió a los otros sectores menos importantes. El producto nacional bruto en 1964 se estimó en 767 millones de rupias, o sea 161 millones de rupias menos que en 1963. Durante este período el ingreso por habitante bajó de 1.300 a 1.020 rupias.

56. En 1963 la agricultura y la manufactura contribuyeron con un 33% y un 19% respectivamente al producto nacional bruto, y el resto correspondió a los otros sectores menos importantes.

57. La relativa prosperidad de que goza la Isla Mauricio se debe casi enteramente a la continua expansión de la industria azucarera y a los precios garantizados en virtud del Acuerdo Azucarero del Commonwealth, válido hasta 1971.

58. En 1963 y 1964 las tierras cultivables destinadas a la caña de azúcar continuaron aumentando; pasaron de 213.000 a 215.800 acres, lo que representa un 90% de la superficie total bajo cultivo. La producción de azúcar varía según las condiciones meteorológicas; en este período experimentó una considerable disminución (de 685.300 toneladas a 519.600). En cambio, se registró un ligero aumento en las exportaciones de azúcar, de 574.300 a 575.662 toneladas métricas, lo que representa un 90% y un 94%, respectivamente, de las exportaciones del Territorio.

59. En 1965 se hicieron algunos progresos en la diversificación de la agricultura y la ampliación de las industrias secundarias. Las tierras cultivables no destinadas al cultivo de la caña de azúcar aumentaron de 2.400 acres a 17.600, mientras que el terreno dedicado a la caña de azúcar siguió siendo de 215.800 acres. Una circunstancia notable fue que el té pasó a ser un cultivo industrial importante por haber aumentado de 800 a 6.600 acres la extensión de terreno destinado a ese cultivo. Se crearon veinticinco industrias nuevas, en comparación con once en 1964 y ocho en 1963. Los préstamos concedidos por el Banco de Desarrollo de la Isla Mauricio para fines agrícolas y proyectos industriales se elevaron en total a 1 millón de rupias a fines de 1964 y a 8 millones de rupias a fines de 1965.

60. Las inversiones de capital hechas por las empresas propietarias de ingenios azucareros se estimaron en 165.500.000 rupias para el período 1964-1969, correspondientes a un objetivo de producción de 800.000 toneladas métricas de azúcar.

61. La mayor parte de la caña se produce en escala de plantaciones azucareras. Las plantaciones mayores, con ingenios y equipos modernos, son de propiedad de 23 productores francomauricios, y producen alrededor del 60% de la zafra total. El resto es producido por unos 26.000 campesinos propietarios, en su mayoría indomauricios. Estos cultivan alrededor del 20% de la tierra en uso, y dependen de los 23 ingenios para extraer el azúcar de su caña. Según se informa, los empleos directivos, de supervisión y de carácter técnico en las plantaciones francomauricias están reservados exclusivamente a su propia comunidad.

62. Sin embargo, la situación económica general siguió empeorando en 1965, año en que el comercio exterior ascendió únicamente a 680.100.000 rupias, es decir un total inferior al del año anterior, que había sido de 755.800.000 rupias. Las importaciones se evaluaron en 388.900.000 rupias en 1964 y en 367.300.000 rupias en 1965, en tanto que el total de las exportaciones era de 366.900.000 rupias y 312.800.000 rupias, respectiva-

mente. En 1965 empeoró, pues, la balanza comercial del Territorio.

63. Se produjeron algunos cambios importantes en la estructura de este comercio. El azúcar aún dominó el sector de exportación de la economía, pero el total exportado descendió de 344.200.000 rupias en 1964 a 289.700.000 rupias en 1965. Le siguieron en importancia las exportaciones de té (por valor de 4.400.000 rupias en 1964 y 5.900.000 rupias en 1965), que sustituyó a la melaza (de la que se exportó por valor de 8.800.000 rupias en 1964 y de 5 millones de rupias en 1965) como el segundo producto de exportación. Los cambios en la estructura de las importaciones mostraron aspectos menos favorables. Durante el bienio, las importaciones de productos alimenticios y de aceites y grasas comestibles aumentaron de 117.200.000 a 122.900.000 rupias, y las de bienes de capital, especialmente maquinaria y equipo de transporte, bajaron de 133.700.000 a 121.100.000 rupias. Como anteriormente, el comercio se efectuó sobre todo con el Reino Unido, que en 1965 recibió el 76,2% de las exportaciones del Territorio y suministró el 26,7% de sus importaciones.

64. La desfavorable situación de la economía en los tiempos recientes ha debilitado la posición financiera del Territorio. En 1965 los ingresos presupuestarios disminuyeron en 10 millones de rupias, llegando a un nivel de 205 millones, mientras que los gastos presupuestarios aumentaron en 18 millones hasta llegar a un nivel de 210 millones de rupias. Los ingresos de capital se elevaron a 38 millones de rupias y los gastos de capital a 52 millones, en comparación con 61 millones y 56 millones de rupias respectivamente en 1964. Así pues, hubo un déficit presupuestario total de unos 20 millones de rupias. La deuda pública en el último trimestre de 1965 ascendía a 264 millones de rupias, o sea 18 millones más que en el trimestre equivalente de 1964.

65. Los principales problemas económicos que afronta el Territorio derivan de la gran medida en que su economía depende del azúcar, y de la urgente necesidad de ampliar las oportunidades de empleo para una población cada vez más numerosa.

66. Los dos principales partidos políticos — el MLP y el PMSD — tienen cabal conciencia de estos problemas. La política de asociación con el Reino Unido del PMSD está inspirada en parte, según se dice, por el temor de que la independencia conduzca a la nacionalización de la industria azucarera y posiblemente a la discriminación laboral en favor de los indomauricios. Se informó que, a fin de disipar estos temores, el líder del MLP habría dicho que su partido estaba en favor de salvaguardias constitucionales para las minorías y se oponía a la nacionalización.

67. El Gobierno ha hecho esfuerzos para promover la diversificación de la agricultura, pero un factor que traba la realización de este objetivo es que las condiciones de comercialización garantizadas hacen que a la población le convenga más el cultivo de la caña de azúcar.

68. Las industrias manufactureras de la Isla Mauricio están todavía en sus etapas iniciales. Con un mercado internamente relativamente pequeño, y sin materia prima fuera del azúcar y sus productos derivados, el aloe y algunas maderas, el desarrollo de las industrias manufactureras se ha limitado en general a las directamente relacionadas con la elaboración de estas materias primas.

69. Las medidas tomadas por el Gobierno para estimular el crecimiento de industrias secundarias inclu-

yen concesiones en materia de derechos de importación, o exenciones aplicables a las maquinarias, instalaciones y materias primas para la manufactura en Mauricio, e incentivos en el impuesto a los réditos. Estos incentivos han tenido ya como resultado que se produzcan localmente una serie de rubros, incluyendo baterías de automóviles, bióxido de carbono, pinturas bituminosas, clavos, manufacturas de fibra de vidrio, muebles de acero, etc., y el establecimiento de un moderno aserradero, una fábrica de cerveza y un establecimiento de elaboración de leche.

70. Según informe, el líder del MLP ha dicho, explicando la política de su partido de independencia dentro del Commonwealth, que la Isla Mauricio es económicamente más viable que otras colonias a las que se les ha concedido la independencia; que nunca ha necesitado un subsidio para equilibrar su presupuesto; y que ha financiado la mayor parte de su desarrollo con sus propios recursos.

71. La diversificación de la economía del Territorio y la reducción de su dependencia del azúcar son los objetivos básicos de un programa de reconstrucción y fomento, que originalmente abarcó el período 1960-1965. En 1964 se decidió aumentar el límite máximo del programa a 400 millones de rupias y prorrogar su vigilancia hasta mediados de 1966. El Reino Unido contribuye con alrededor de una tercera parte del costo total del programa revisado.

72. El 1º de marzo de 1964 se estableció el Banco de Fomento de Mauricio (Development Bank of Mauritius) para otorgar préstamos con fines agrícolas y empresas industriales. El monto total de los préstamos concedidos por el Banco hasta fines de año era de unas 966.000 rupias.

73. Más recientemente, el Gobierno mostró gran preocupación por el creciente nivel de desempleo causado principalmente por la baja de la economía y el rápido crecimiento de la población. La población en edad de trabajar se elevaba a 190.000 personas en 1963 y se espera que en 1970 llegue a 250.000. En 1965 el Gobierno publicó por primera vez datos estadísticos más detallados para 1964 sobre las posibilidades de empleo que ofrecían diversas empresas de construcción, electricidad, minas y canteras, manufacturas y reparaciones y transportes. El número total de personas ocupadas en las empresas mencionadas era de 22.000. Además, las 23 plantaciones de azúcar francomauricias contaban con 49.000 empleados en 1964. Sin embargo, no se dispone de datos sobre las cifras totales de desempleo en ese año.

74. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 16 de marzo de 1966, el Gobernador propuso varias medidas para conseguir el pleno empleo en 1970, principalmente mediante la aceleración del crecimiento de la economía y la reducción de la tasa de nacimientos. Posteriormente, a pesar de la oposición del PMSD, se comunicó que la Asamblea había aprobado una moción por la que se apoyaban estas medidas, que se resumen a continuación.

75. En virtud de un nuevo programa de desarrollo para el período de julio de 1966 a junio de 1970, todos los proyectos se llevarán a cabo de modo que "requieran la mayor intensidad posible de mano de obra" y se destinará directamente al desarrollo de la producción una proporción más alta de fondos. El Gobierno tiene la intención de casi duplicar la tasa de expansión de las plantaciones de té de pequeños propietarios y de examinar

en breve con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) la financiación de dos proyectos de regadío.

76. El Gobierno seguirá tratando de crear condiciones favorables para la inversión privada por medios tales como el fortalecimiento del sistema de la hacienda pública, el establecimiento de una oficina de normas y de un centro de capacitación comercial (cuyo costo será financiado principalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el mantenimiento de buenas relaciones industriales y de la estabilidad del costo básico de vida, y la nueva ampliación y mejoramiento de los servicios urbanos y de sanidad, vivienda y transporte. El Gobierno seguirá concediendo fondos a empresarios por medio del Banco de Desarrollo de Mauricio. Están en estudio, entre otros, tres grandes proyectos industriales del sector privado, concretamente relativos a los abonos, los productos textiles y los aceites comestibles.

77. El Gobierno ha convenido en que la Isla Mauricio participe en las negociaciones de establecimiento de una comunidad económica del África oriental y tomará todas las medidas oportunas para fomentar un mayor desarrollo de la economía dentro de la comunidad.

78. Con la ayuda ofrecida por el Ministerio de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido y por otros organismos de ultramar, el Gobierno tiene el propósito de frenar la tasa de crecimiento demográfico mediante una campaña constante de educación en planificación de la familia. Cuando haya oportunidades de empleo de habitantes de la Isla Mauricio en el extranjero, se prestará ayuda a los que deseen aprovecharlas. Se mejorará la administración de la asistencia pública para aquellos a quienes no se pueda encontrar trabajo.

79. Según se indica en el proyecto de presupuesto de capital, los ingresos y los gastos correspondientes al primer año del programa de desarrollo para 1966-1970 se estiman en 65.900.000 rupias y 93.200.000 rupias, respectivamente. El presupuesto tiene tres fuentes principales de ingreso: transferencias del presupuesto ordinario, 12 millones de rupias; Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial, 14.800.000 rupias; y empréstitos, 32.600.000 rupias. Sin embargo, con la adición de fondos para el desarrollo por un total de unos 48.300.000 rupias no gastadas al final de junio de 1966, el total previsto de los ingresos de capital asciende a 114.200.000 rupias.

80. En 1966 el Gobierno decidió aumentar los impuestos directos e indirectos con objeto de distribuir la carga entre los que podrían pagar y de hacer frente al déficit presupuestario de 25 millones de rupias para el período terminado el 30 de junio de 1966. Decidió también reforzar el sistema monetario constituyendo en 1966 un banco central que se denominará Banco de la Isla Mauricio y contará con un capital autorizado de 10 millones de rupias.

Condiciones sociales

Mano de obra

81. La tasa media de crecimiento de la población en los últimos años ha sido de unas 20.000 personas por año. Se calcula el crecimiento anual de la población en edad de trabajar (15 a 64 años), hasta 1972, en unas 7.500 personas. Se han tomado medidas para acelerar el crecimiento económico, pero hasta ahora la economía no se ha expandido lo suficientemente rápido como

para proporcionar empleo a todos los que lo buscan, y se considera probable que la actual tendencia continúe a menos que se reduzca la tasa de natalidad. Más recientemente, el problema del desempleo se ha visto agravado por la continua incertidumbre política y las condiciones meteorológicas adversas. Como resultado de ello, ha aumentado cada vez más el número de los que quieren emigrar al Reino Unido, pero la cantidad de solicitudes aprobadas ha sido reducida.

82. El Gobierno ha tomado medidas para aliviar la situación del desempleo. Entre éstas se cuentan un registro de trabajadores agrícolas sin empleo que abarca todo el Territorio, la aplicación de planes de obras de socorro y de cultivos comestibles, la prestación de ayuda pública a las personas a quienes no se puede proporcionar trabajo, y la iniciación de un programa de planificación de la familia.

83. La principal fuente de empleo en el Territorio es la industria azucarera, que proporcionaba empleo a 40.822 y 48.635 personas en marzo y septiembre de 1964, respectivamente. Había ese año, 78 asociaciones de empleados (7 más que en 1963), con un total de 48.229 miembros (6.113 más que en 1963). Se produjeron 25 conflictos laborales que abarcaron a 7.302 trabajadores (de los cuales 5.447 estaban empleados en la industria azucarera) y que resultaron en una pérdida de 11.053 días-hombre. La causa de estos conflictos, en lo referente a la industria azucarera, fue la disconformidad con las escalas de salarios, que permanecieron estáticas entre 1963 y 1964.

Sanidad

84. Los gastos del Gobierno en servicios médicos y de sanidad en el ejercicio financiero 1963-1964 ascendieron a 19.205.094 rupias (un aumento de 949.888 rupias con respecto al año anterior), o sea un 11% de los gastos totales del Territorio.

85. En 1964 los servicios médicos y de sanidad se ampliaron con la adición de un dispensario del Gobierno, una sala de maternidad en un hospital gubernamental y nueve centros de maternidad, protección al niño y asistencia social. La cantidad total de camas disponibles para pacientes hospitalizados en el Territorio fue de 3.324 (un aumento de 100 con respecto al año anterior). Este total incluía 2.121 camas de hospitales generales, y equivalía a una cama de hospital general por cada 345 personas. Hubo 118 médicos empleados por el Gobierno, y 65 en práctica privada (en comparación con 122 y 60, respectivamente, el año anterior). De este modo, había un médico por cada 4.008 personas.

86. La principal enfermedad que se encuentra entre la población de la Isla Mauricio es la anemia, que puede afectar hasta un 50% o más de ciertos grupos de la población. Este y otros desórdenes alimentarios afines llevan a deficientes condiciones físicas, enfermedades intermitentes y apatía general.

Situación de la enseñanza

87. Los gastos presupuestarios reales para el ejercicio económico 1963-1964 sumaron 24.900.000 rupias (en comparación con 22.800.000 rupias en el año anterior), o sea aproximadamente un 13,8% de los gastos presupuestarios totales del Territorio. Los gastos de capital en la enseñanza fueron de 3.400.000 rupias (en comparación con 2.800.000 rupias en el año anterior).

88. En 1964 la matrícula en las escuelas primarias, secundarias, normales y de formación profesional fue la siguiente:

	<i>Escuelas</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Maestros</i>
Enseñanza primaria	297 ^a	132.074 ^b	3.750
Enseñanza secundaria	119 ^c	31.797	1.348
Enseñanza normal	1 ^d	496	23
Formación profesional	3 ^d	301	28

^a Incluidas 153 escuelas gubernamentales, 56 subvencionadas y 88 privadas.

^b Representa más del 88% de todos los niños en edad escolar (5-6 a 11-12 años).

^c Incluidas cuatro escuelas gubernamentales, 13 subvencionadas y 102 privadas.

^d Escuelas gubernamentales.

89. Las escuelas gubernamentales y subvencionadas proporcionan enseñanza privada gratuita, pero no así las escuelas privadas. Uno de los principales objetivos del Gobierno ha sido ampliar los servicios de enseñanza lo más rápidamente posible a fin de incluir a todos los niños en edad escolar. El Gobierno se ve ahora frente al gran problema del exceso de alumnos en las escuelas primarias, que se ha visto agravado por los daños que los ciclones de 1960 ocasionaron a los edificios escolares. En 1964 se terminaron diez nuevas escuelas primarias, y se elaboró un amplio programa de construcciones escolares para el año siguiente.

90. Otro importante problema es la necesidad de ampliar los servicios de la enseñanza superior. Actualmente, la mayoría de los estudiantes de Mauricio que buscan esta enseñanza deben ir al extranjero. En 1964 más de 1.100 estudiantes asistían a cursos regulares en instituciones de enseñanza superior del extranjero, y la mayoría de ellos estaban en el Reino Unido. Ciertos países del Commonwealth y Estados Miembros de las Naciones Unidas han otorgado a estudiantes de Mauricio 43 becas y pensiones de estudio y una pasantía, y el Gobierno de Mauricio concedió seis becas a estudiantes para que concurrieran a universidades u otras instituciones del Reino Unido y otros países.

91. Durante el año, se solicitó al Fondo Especial de las Naciones Unidas asistencia técnica para ampliar el Mauritius Technical Institute. Se están haciendo gestiones para establecer en el Territorio una universidad que será financiada mediante un subsidio de 3 millones de rupias del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial. La universidad tendrá una facultad de agronomía, una facultad de servicios de desarrollo y un instituto de educación. Tendrá también cursos fuera de su recinto.

2. Islas Seychelles

Generalidades

92. El 10 de noviembre de 1965 el Secretario de Estado para las Colonias anunció que a partir del 8 de noviembre de 1965 tres de las 92 islas que componen la colonia de las Islas Seychelles — Aldabra, Farquhar y Desrochas —, junto con el archipiélago de Chagos, administrado anteriormente por el Gobierno de la Isla Mauricio, pasarían a formar una nueva colonia creada por el Gobierno del Reino Unido y denominada Territorio Británico del Océano Indico. La población de las islas mencionadas es de unos 100, 172 y 112 habitantes respectivamente.

93. Según información recibida, este cambio tiene por objeto permitir al Reino Unido y a los Estados Unidos utilizar la colonia como base estratégica militar al este de Suez (véase párr. 43 *supra*). Están en estudio los detalles de los acuerdos administrativos, jurídicos y financieros aplicables al nuevo territorio, así como los relativos a la indemnización que hay que pagar a las empresas comerciales y privadas a las que afecte este cambio. Por lo que respecta al Gobierno de las Islas Seychelles, el Gobierno del Reino Unido ha indicado que está dispuesto a sufragar el gasto de construir un aeropuerto civil en las Islas Seychelles a fin de proporcionar un enlace con la Península indostánica y con Africa.

94. Al 30 de junio de 1964 la población de las Islas Seychelles se calculaba en 46.472 habitantes, en comparación con 45.089 el 30 de junio de 1963. Las Islas Seychelles, al igual que la Isla Mauricio, están experimentando un gran aumento de población. El crecimiento demográfico en los últimos cuatro años ha sido superior a lo que se esperaba; de continuar esta tendencia, es posible que para 1970 la población haya llegado a un total que se calcula en 57.000 habitantes.

Evolución política y constitucional

95. A fines de 1964 dominaban la esfera política del Territorio dos partidos: el Seychelles People's United Party (SPUP) y el Seychelles Democratic Party (SDP). Los principales asuntos sobre los cuales discutían esos partidos eran los siguientes:

a) La cuestión del *status* futuro de las Islas. El SPUP ha estado en favor de acelerar el progreso político y la independencia de las Islas Seychelles, mientras que el SDP se opone a la independencia.

b) La presencia de la estación de seguimiento de satélites de los Estados Unidos situada en la Isla de Mahé. El SPUP ha declarado que ello va en contra de su política de no alineación, mientras que el SDP lo ha celebrado como un factor principal de absorción de mano de obra.

96. Paralelamente a los hechos políticos de 1963 y 1964 se produjo un rápido crecimiento del movimiento sindicalista, ya que la mayoría de los sindicatos se vinculan a uno u otro de los dos principales partidos. Por primera vez en la historia de las Islas Seychelles, se recurrió a la huelga organizada en apoyo de las demandas de salarios y de nuevas condiciones de trabajo. Al 31 de diciembre de 1964 había 13 sindicatos.

97. El principal problema que afrontaban el SDP y el SPUP — la cuestión del futuro *status* del Territorio — tuvo repercusiones en el Consejo Legislativo, en el cual, en febrero de 1964, se aprobó una moción pidiendo al Gobierno que averiguara la reacción del Reino Unido ante "la idea de que las Islas Seychelles continuaran siendo británicas, o siguieran integradas con el Reino Unido". La respuesta del Secretario de Estado, en el sentido de que el Gobierno del Reino Unido no deseaba tomar la iniciativa para sugerir ningún cambio en las relaciones entre Gran Bretaña y las Seychelles, fue favorablemente acogida, por unanimidad, en el Consejo Legislativo (23 de octubre de 1964).

98. El 18 de noviembre de 1965, en respuesta a un despacho del 3 de noviembre de 1964 sobre el futuro *status* del Territorio, que le había dirigido el Gobernador de las Islas Seychelles, el Secretario de Estado de Colonias declaró concretamente que:

a) Para examinar esas cuestiones había estado en todo momento "atento a la opinión que expresaron los miembros no oficiales del Consejo Legislativo en cuanto a la conveniencia de mantener como en la actualidad la relación entre Gran Bretaña y las Islas Seychelles", y que no tenía intención de "oponerse a esa opinión en modo alguno".

b) Le había "sorprendido el hecho de que, aunque según la legislación vigente el derecho de voto está bastante generalizado, sea relativamente pequeño el número de personas que votan en las elecciones generales", lo que le parecía "una poco saludable situación". Por lo tanto, consideraba que "se debe dar ahora un paso hacia el sufragio universal de adultos".

c) "Aun cuando se aplicara inmediatamente el sufragio universal de adultos, tendría poco efecto político hasta las próximas elecciones generales. No obstante, si se adoptara ahora esa medida, como ya he indicado, se contribuiría a la educación política del pueblo. Además, habría que considerar la posibilidad de que en el intervalo desde ahora a las próximas elecciones generales, se adopten algunas medidas más positivas en ese sentido."

d) "Teniendo en cuenta que la mayoría de los cargos importantes de la administración de las Islas Seychelles están ocupados por funcionarios del país, ... se podría invitar ahora a los miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo a que se hagan cargo de algunos aspectos del funcionamiento de los departamentos del Gobierno."

e) "Además se deberían examinar también ahora importantes cuestiones a largo plazo relativas a los acuerdos constitucionales de la Colonia y al eventual *status* futuro"... "En otros territorios se ha considerado conveniente que un experto en derecho constitucional visite el Territorio y prepare un informe — a la luz de las opiniones que, sobre el terreno, le expongan el Gobierno, los partidos políticos y los individuos — en el que indique las diversas medidas que se podrían adoptar y los argumentos a favor y en contra de cada una de ellas." Si esa sugerencia fuera aceptable, se "dispondría que una persona idónea visitara las Islas Seychelles en un futuro relativamente cercano para redactar un informe".

f) "Si se dispusiera una visita en esas condiciones, yo sugeriría que, con sujeción a las observaciones que ustedes nos hicieran, las atribuciones del experto constitucional fueran las siguientes:

"Examinar las diversas posibilidades de evolución constitucional en el Territorio, habida cuenta de los términos del despacho No. 177 de Lord Lansdowne, de fecha 17 de agosto de 1964, y del despacho No. 226 de Lord Oxford de 3 de noviembre de 1964, y la actual evolución económica, social y política de las Islas Seychelles y teniendo presente la voluntad del pueblo y las realidades de la situación; al realizar este examen, consultar al Gobierno de las Seychelles, a los miembros de los Consejos Legislativo y Ejecutivo, a los partidos políticos, y a las organizaciones y miembros del público interesados; e informar oportunamente."

99. El 3 de febrero de 1966 se anunció que Sir Colville Daverell, antiguo Gobernador de las Islas Windward (de 1955 a 1959) y de la Isla Mauricio (de 1959 a 1962), había aceptado una invitación del Secretario de Estado para visitar las Islas Seychelles, como

consultor constitucional. Sir Colville llegó a las Islas Seychelles el 10 de febrero de 1966 y su visita duró un mes aproximadamente. El Secretario de Estado ha recibido recientemente las recomendaciones que se han sometido a estudio.

100. Durante su visita a Londres en abril de 1966, el Sr. F. A. René, miembro del Consejo Legislativo y dirigente del Seychelles People's Unity Party (SPUP), uno de los partidos principales del Territorio, pidió, según se informó, que se concediese a las Islas Seychelles el gobierno propio interno, introduciendo el sufragio universal de adultos en los meses de octubre a noviembre de 1966, y que el Territorio pasara a ser independiente a finales de 1969 o principios de 1970. El señor René dijo también que su partido se oponía a la compra por el Gobierno del Reino Unido de tres islas del Territorio para su uso como bases militares, pero que

ya era demasiado tarde para continuar la discusión del asunto.

Condiciones económicas

101. La economía de las Islas Seychelles depende de la agricultura. Se trata de una economía de monocultivo, ya que la mayor parte de la tierra cultivada está constituida por cocotales. El precio de la copra, que constituye la principal exportación, representa del 60% al 70% de las exportaciones del país, y constituye el factor económico más importante de la vida del Territorio.

102. La superficie total de cocotales es de unos 23.000 acres y el número de palmeras se calcula en 1.750.000. Los cultivos de canela ocupan unos 14.000 acres y los de vainilla 700. La producción de copra, canela y vainilla fue la siguiente:

	Cantidad (toneladas)		Valor (rupias)	
	1963	1964	1963	1964
Copra	5.703	7.034	5.178.561	6.567.430
Corteza de canela	1.007	1.174	725.089	834.296
Aceite de hoja	66	75,5	595.839	707.711
Rollos de corteza seca	9	6	33.186	39.118
Vainilla	2,05	1,44	85.917	51.226

103. El precio medio cobrado por la copra, por tonelada, fue de 786,05 rupias en 1962; de 908,04 en 1963; y de 933,67 en 1964. En 1963 y 1964 no se pagaron los subsidios con cargo al Fondo de Estabilización de la Copra, que en estos últimos años aseguraba a los plantadores un ingreso mínimo de 800 rupias por tonelada.

104. Las principales industrias de las Islas Seychelles son la preparación de la copra y de la vainilla, y la extracción de aceites esenciales para la exportación. El aceite de coco para cocina y su producto secundario (las tortas de coco) para pienso, los aceites y la cuerda de fibra de coco se producen en pequeñas cantidades para el consumo local.

105. A finales de 1964 se estableció una fábrica de fibra de coco. Se tiene intención de manufacturar unas 1.000 toneladas de fibra al año para la exportación, lo que incrementará en 500.000 rupias aproximadamente el valor de las exportaciones del Territorio.

106. En algunas de las islas de la periferia hay depósitos de guano. Entre 1901 y 1960 se exportaron unas 687.500 toneladas de guano valuadas en más de 17 millones de rupias y, como consecuencia, en muchas de esas islas se agotaron las existencias. En tres islas quedan aún depósitos considerables, y se ha sugerido que el guano de las Islas Almirantes se reserve para atender las necesidades del Territorio, mientras que el de la Isla de St. Pierre continúe enviándose a la Isla Mauricio. La empresa particular que tiene arrendados los depósitos de la Isla Assumption concentró sus actividades en la instalación de equipo, extracción y trituración en 1963 y 1964. La compañía tiene permiso para extraer hasta 10.000 toneladas por año, mediante el pago de un canon (4 rupias por tonelada) y un impuesto de exportación, y se espera que venda considerables cantidades de guano en el mercado mundial en 1965.

107. A falta de materias primas, el Territorio tiene que buscar en el mar nuevas fuentes de riqueza. No obstante, todavía no ha logrado atraer el considerable capital que le hace falta para conseguir los barcos, almacenes refrigerados y una planta de enlatado para explotar las grandes riquezas pesqueras que se cree existen en esta parte del Océano Índico. En la actualidad sólo se lleva a cabo una limitada exportación de pescado salado, valuada en unas 40.000 rupias en 1963.

108. Los principales cultivos del Territorio siguen siendo los cocoteros, la canela, el pachulí y la vainilla, pero se espera introducir el té como cultivo secundario sobre todo en los pequeños predios, ahora que se ha creado la Seychelles Tea Company. La compañía ha hecho plantaciones en 100 acres de terrenos de la Corona y ahora se dedica a hacerlo en otros 200 acres. Se espera plantar todavía más té en pequeños predios y haciendas privadas.

109. En virtud del Plan de Colonización Agraria, el Gobierno proporciona pequeñas extensiones de tierra para su cultivo. A fines de 1964 había 150 de esas concesiones, principalmente de cinco acres de extensión, en comparación con los 100 que había a fines de 1963.

110. Como consecuencia de una campaña que llevó a cabo el Departamento de Agricultura, los plantadores están mostrando cierto interés por la cría de ganado, que está siendo fomentada como medio valioso de ayuda para fertilizar las plantaciones e incrementar a la vez el abastecimiento de carne y leche del Territorio. El Departamento mantiene una cabaña de ganado indígena y de cruces de sindhi y frisón, de los que se obtienen los animales jóvenes para los agricultores.

111. Se registraron progresos en la esfera del desarrollo de las cooperativas, y las sociedades de transformación y comercialización tuvieron mayor número de

miembros y más productividad. En 1964 se inscribieron en el registro varias sociedades nuevas. Tanto en la Isla de Mahé como en la Isla de Praslin hay ahora una cadena de sociedades de fabricación de copra y, por lo tanto, todos los plantadores de esas dos islas pueden participar en la producción de copra en gran escala mediante su asociación en una cooperativa de productores, y en la exportación de copra por medio de un sindicato de productores registrado en 1964. También hay una sociedad de productores de canela, una cooperativa de avicultores, y otras de construcción que se encarga de contratos de edificación y de la fabricación de bloques y tuberías de cemento. A fines de 1964 funcionaban 12 sociedades, que manipularon productos por valor de 88.400 libras durante el año. Hay un Banco Agrícola que ha venido concediendo préstamos a los plantadores para saldar deudas y para el desarrollo.

112. En 1964 el valor de las exportaciones fue de 649.578 libras esterlinas, en comparación con 515.045 libras en 1963. El valor de las importaciones ascendió a 1.179.336 libras, en comparación con 1.095.058 en 1963.

113. Los principales artículos de exportación en 1964 fueron la copra (497.099 libras esterlinas) y el aceite y la corteza de canela (160.243 libras esterlinas). Los principales artículos de importación fueron productos alimenticios (arroz, maíz, harina, azúcar, etc., 407.611 libras esterlinas); petróleo, gasolina y combustible diesel (112.527 libras esterlinas); y artículos de algodón en pieza (77.699 libras esterlinas).

114. La totalidad del comercio de importación y exportación con las Islas Seychelles, con excepción de algunos envíos de guano a África desde las islas periféricas, se efectúa a través del puerto de Victoria. Las exportaciones de copra las hace la Seychelles Copra Association, que es una asociación de expedidores y productores. De la importación del arroz, principal alimento de los isleños, se encarga el Gobierno de las Seychelles, en virtud de un acuerdo con el Gobierno de Birmania. El resto de las transacciones comerciales del Territorio las llevan a cabo varios comerciantes y agencias.

115. El total del ingreso público se calculó en 10.536.122 rupias, de las cuales 7.084.000 correspondieron a fuentes locales, y el resto a fondos del Reino Unido. El total de los gastos ascendió a 11.116.838 rupias, de las que 2.930.356 correspondieron a los planes de Desarrollo y Bienestar Colonial.

116. En 1964, el Gobierno de las Seychelles ofreció su segundo empréstito al público por la suma de 267.000 rupias, a fin de financiar el desarrollo de la red eléctrica del Territorio. El empréstito fue suscrito en su totalidad, con lo cual el total de la deuda pública del Territorio ascendió a 1.071.000 rupias al 31 de diciembre de 1964.

117. A pesar de los intentos de frenar el aumento del costo de vida mediante la imposición temporal de limitaciones de precios sobre ciertos productos indispensables, los precios han seguido subiendo constantemente. No se han publicado cifras concretas sobre los años que se examinan.

118. En las Islas Seychelles no hay ni aeropuertos ni ferrocarriles, pero existe un pequeño parque de autobuses diesel que recorren las principales carreteras de la Isla de Mahé. En esa misma isla hay 40 millas de carreteras asfaltadas y 34 millas más de carreteras de tierra por las que pueden circular automóviles. La isla de Praslin tiene 30 millas de carreteras de tierra, la mi-

tad de las cuales son transitables por automóviles, y la isla de La Digue tiene ocho millas de carreteras de tierra.

119. El plan quinquenal de desarrollo financiado en gran parte con fondos del Desarrollo y Bienestar Colonial, terminó el 31 de marzo de 1964. Se calculaba que para el período bienal comenzado el 1° de abril de 1964 se proporcionarían unas 550.000 libras con cargo a los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial. Los gastos se distribuyeron en la forma siguiente: recursos naturales, 35,6%; obras públicas y comunicaciones, 28,4%; servicios sociales, 28,9%; turismo e información, 2,8%; proyectos diversos, 1,6%; y saldo no comprometido, 2,7%.

120. Se ha preparado un nuevo plan de desarrollo para el período trienal que comienza el 1° de abril de 1966 y ese plan está actualmente sometido al estudio del Secretario de Estado para las Colonias.

121. En su declaración de 18 de noviembre de 1965, el Secretario de Estado para las Colonias dijo que esperaba poder asignar más fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial al Territorio a fin de permitir un considerable desarrollo económico y social. A este respecto, destacó la necesidad de ampliar y mejorar la agricultura y, en particular, de acelerar lo más posible el programa de colonización agraria a fin de lograr un medio de vida seguro y adecuado para la creciente población.

122. Habida cuenta de la inevitable inclinación hacia la agricultura, el Secretario de Estado se mostró convencido de que había que tomar medidas para conseguir la plena utilización de las limitadas tierras del Territorio. Aunque sabía que muchas grandes haciendas de las Islas Seychelles estaban bien administradas y proporcionaban un gran rendimiento, y que el Departamento de Agricultura continuaba promoviendo el perfeccionamiento de los sistemas agropecuarios, el Secretario de Estado consideró que las tierras descuidadas o no cultivadas constituían una pesada carga que tenía que soportar el Territorio. Por lo tanto, estimó necesario considerar, en el contexto del próximo plan de desarrollo, las nuevas medidas de aliento que se podían adoptar razonablemente para fomentar las prácticas agropecuarias adecuadas y aumentar la productividad de la tierra, e igualmente las sanciones (como la confiscación o la administración oficial en ciertas circunstancias) que se podrían prever legalmente para conseguir que se explotaran plenamente las tierras descuidadas o no cultivadas.

123. Además, el Secretario de Estado sugirió que se examinara la posibilidad de adoptar medidas para conseguir la máxima utilización de los recursos financieros locales. Consideraba oportuno estudiar la posibilidad de crear una corporación de fomento para las Islas Seychelles; explorar la posibilidad de utilizar los ingresos de inversión del Fondo para la Estabilización del Precio de la Copra de modo que aumentara el ritmo de desarrollo agrícola; y ver si se podría fomentar ese desarrollo mediante cambios en la política fiscal. Opinó también que se debía considerar la conveniencia de adoptar medidas para conseguir que parte de la extraordinaria plusvalía de las tierras de las Seychelles, particularmente si se debía al establecimiento de un aeropuerto, pasara a incrementar los beneficios de la comunidad en general.

124. El Secretario de Estado dijo que no ignoraba que el pueblo de las Islas Seychelles deseaba que se con-

siguieran progresos en algunos otros sectores de la economía, concretamente en las comunicaciones aéreas y en las pesquerías de mar adentro. Además de llamar la atención hacia una noticia reciente de que se iba a construir un aeropuerto, señaló que un grupo importante de pesquerías había hecho ofertas para efectuar un estudio con miras a investigar la posibilidad de situar su base en las Islas Seychelles, y que el Gobierno de las Islas estaba en negociaciones con ese grupo respecto de las inversiones del mismo en el Territorio.

Condiciones sociales

Mano de obra

125. No se han comunicado cambios importantes en materia de empleo en comparación con 1963. El número de naturales de las Islas Seychelles beneficiados por los servicios de la Oficina del Trabajo en la obtención de empleo en el exterior fue de 385.

126. En 1964 se puso en marcha un proyecto de viviendas baratas a fin de proporcionar alojamiento a 188 familias. Ese proyecto se financiaba en parte mediante empréstitos y en parte con cargo al subsidio de Desarrollo y Bienestar Colonial. En las parcelas de colonización agraria, el Gobierno ha venido construyendo casas últimamente al ritmo de unas 15 por año. Hasta ahora se han terminado 189 viviendas rústicas. A los plantadores que están dispuestos a construir casas para los trabajadores en sus terrenos se les ofrecen primas hasta de 100 libras; en 1964 se dispuso la concesión de 100 primas por ese concepto.

127. En su declaración del 18 de noviembre de 1965, el Secretario de Estado para las Colonias dijo que los salarios de los obreros agrícolas de las Islas Seychelles continuaban siendo extraordinariamente bajos. Todo programa de desarrollo económico y social debiera orientarse a promover el bienestar de los miembros más pobres de la comunidad. Señaló con satisfacción que el nivel de los salarios de los obreros agrícolas había aumentado bastante en los últimos tiempos, pero expresó la esperanza de que, oportunamente, fuera posible tratar de adoptar la semana de trabajo de 45 horas para todos en general. Además, consideró que se debía tratar de mejorar el nivel de vida de los demás trabajadores que tenían salarios muy bajos, y sugirió que los salarios que se estaban pagando a los trabajadores del Gobierno sirvieran de meta razonable. Por lo tanto, le causaba satisfacción saber que se estaba considerando ya la posibilidad de elevar el salario mínimo legal de todas las categorías de trabajadores.

128. Según informes, el 13 de junio de 1966 se produjo en Victoria una huelga en la que participaron unos 3.250 trabajadores, principalmente empleados del Gobierno, solicitando salarios más altos para los trabajadores pagados por mes. Los representantes de sus sindicatos y el Gobierno se achacaban mutuamente la responsabilidad por la ruptura de las negociaciones. Los primeros rechazaron el aumento provisional del sueldo mensual de 72 a 80 rupias como insuficiente, señalando que, según los cálculos más recientes de un órgano gubernamental, el costo de vida para esos trabajadores había subido en ciento por ciento. El Gobierno declaró que su política era aplazar la fijación definitiva de salarios para sus trabajadores no calificados hasta que se pudiera apreciar en qué medida los controles de precios ya introducidos conseguían impedir el alza del costo de vida.

129. El 16 de junio de 1966, cuando entraron también en huelga los trabajadores de la fábrica de cuerda de fibra de coco y de la Seychelles Tea Company, el sindicato de trabajadores de las Islas Seychelles pidió a las Naciones Unidas que intercedieran y que contribuyeran a poner fin a la disputa. La situación fue muy tensa hasta que el Sr. F. A. René, asesor jurídico del sindicato y, según se señaló anteriormente, miembro del Consejo Legislativo y dirigente del SPUP, pidió a los trabajadores que evitaran toda violencia.

130. Al día siguiente, cuando llegaron a Victoria tropas de desembarco del destructor británico "Carysfort" para prestar asistencia a la policía, los huelguistas se dispersaron pacíficamente. Volvieron al trabajo el 20 de junio de 1966, al día siguiente de que saliera de Adén en dirección a las Islas Seychelles, como nueva medida de seguridad, la fragata británica "Gurkha" con 250 hombres. El Gobierno declaró que había estimado necesario tomar medidas para mantener la seguridad y el orden público porque algunos miembros de los sindicatos habían recurrido a la intimidación para impedir a otros que trabajaran. El Gobierno estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con el sindicato respectivo cuando tuviese la seguridad de que la situación había vuelto a la normalidad.

131. El 7 de julio de 1966 el Secretario de Estado para las Colonias, en respuesta a una pregunta formulada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, dijo que la situación de las Islas Seychelles había vuelto a la normalidad.

Sanidad

132. Los gastos por servicios médicos y sanitarios en el Territorio en 1964 se calcularon en 1.235.640 rupias, o sea el 15,09% del presupuesto total, en comparación con 1.141.277 en 1963, aparte de los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial.

133. El Territorio se vio prácticamente libre de epidemias en 1964. No obstante, en estos últimos años ha habido un número elevado de casos de enfermedades venéreas. En virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (PAAT), las Islas Seychelles recibirán asistencia en una campaña contra las enfermedades venéreas en 1965-1966.

134. Las islas principales del Territorio tienen cuatro hospitales con 208 camas, dos clínicas y un sanatorio antituberculoso con capacidad para 92 pacientes. La proporción de funcionarios médicos y camas de hospital por habitante son de 1 por 3.006 y de 1 por 213 personas, respectivamente.

Situación de la enseñanza

135. En 1964 los gastos del Gobierno por concepto de enseñanza se elevaron a 1.393.973 rupias, o sea el 16,5% del total de los gastos, en comparación con 1.283.632, o sea, el 15,7%, en 1963.

136. En 1964 la matrícula escolar era de 8.516 alumnos (4.146 niños y 4.370 niñas), en comparación con 8.156 matriculados en 1963. El número de alumnos de las escuelas primarias era de 5.472. Había 2.916 alumnos en las escuelas secundarias, 31 alumnos en la Escuela Normal, 45 en la Escuela Técnica y 30 en los cursos especiales para maestros. Asistían 22 niñas a los cursos de enfermería.

137. En 1965 se reformó el sistema educacional. Los estudios primarios durarán seis años en lugar de cuatro y a ellos tendrán acceso todos los niños. A la enseñanza primaria seguirá la enseñanza secundaria de primer ciclo (dos años) y a ésta la secundaria (tres años), sobre una base competitiva.

3. Santa Elena

Generalidades

138. A fines de 1964 la población de Santa Elena se estimaba en 4.676 habitantes, en comparación con 4.613 en 1963. La población de Tristan da Cunha se estimaba en 278. No existen cifras recientes sobre la población de la Isla de la Ascensión, otra dependencia de Santa Elena.

Evolución política y constitucional

139. No se ha informado de cambios ocurridos en los campos político y constitucional desde que el Comité Especial consideró Santa Elena en 1964.

Condiciones económicas

140. La superficie de Santa Elena es de 47 millas cuadradas, de las que unos 640 acres están constituidos por tierra cultivable. Unas cinco millas cuadradas están cultivadas con lino, siete millas cuadradas con pastos, y unas tres millas cuadradas están cubiertas por selvas aclimatadas a esta región. Se han recibido informes de progresos conseguidos en un mejor aprovechamiento de la tierra. Aproximadamente el 95% de las zonas dedicadas a pasto han sido cercadas y subdivididas y sometidas a un sistema de pastoreo controlado. El Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial está financiando un programa para continuar el desarrollo de los recursos naturales e hidrológicos. En 1964 se hicieron desembolsos por un total de unas 18.000 libras y están previstos nuevos desembolsos de unas 19.600 libras anuales hasta el año 1966.

141. A continuación se indica la superficie calculada y producción correspondientes a cada cosecha en el año 1964 comparadas con el año 1963:

Cultivo	Superficie (acres)		Producción (toneladas)	
	1963	1964	1963	1964
Lino (fibra y estopa)	3.350	3.350	1.016	1.411
Papas	100	100	200	200
Batatas	60	60	60	120
Verduras	200	230	400	500
Cereales	50	50	20	50
Forraje (verde)	200	200	600	600

142. La producción de fibra, estopa y maroma en 1964, comparada con las de 1963, era como sigue:

	Toneladas		Valor en libras	
	1963	1964	1963	1964
Fibra	780	953	62.114	76.425
Estopa	195	455	8.142	15.990
Maroma y cordel	41	2	4.500	221

143. En 1964, el ingreso público total se estimaba en 277.771 libras esterlinas (comparadas con 313.205 libras esterlinas en 1963). Los gastos se estimaban en 277.771 libras esterlinas.

144. Las exportaciones de Santa Elena en 1964 se elevaron a 105.374 libras esterlinas (88.019 en 1963), y todas ellas fueron a seis países: el Reino Unido (49,84%), Sudáfrica (39,17%), Francia (6,83%), Dinamarca (2,48%), Suecia (1,33%) e Italia (0,35%). Los principales artículos de exportación fueron fibra (76.425 libras esterlinas) y estopa (15.990 libras esterlinas). Las importaciones ascendieron a 309.974 libras esterlinas (279.678 en 1963), procedentes principalmente del Reino Unido (59,53%) y Sudáfrica (21,66%).

145. En la Isla de Tristan da Cunha, que es una dependencia de Santa Elena, se estaba construyendo un pequeño puerto con ayuda del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial. El costo total del proyecto es de unas 80.000 libras esterlinas y cuando esté terminado

se podrán reanudar las operaciones de pesca con base en la costa. Se espera que para entonces la Compañía Pesquera volverá a establecer en la isla una central congeladora, la cual, se confía, dará trabajo a algunos isleños.

Condiciones sociales

Mano de obra

146. A fines de 1964 había un total de 145 hombres que recibían subsidios de desempleo (comparados con 98 hombres en 1963). Con la recaudación procedente de un impuesto público se sostiene una institución en la que son atendidos los ancianos, desamparados y enfermos. En 1964, había 113 personas necesitadas que recibían socorros fuera de instituciones, en forma de vales para alimentos y subsidios en efectivo de 5 a 8 chelines por semana.

147. A fines de 1964, 150 hombres de Santa Elena estaban trabajando en la Isla de Ascensión para la Cable and Wireless Limited. En la misma isla había también

115 hombres empleados por compañías de construcción de los Estados Unidos, más 58 empleados por el Ministerio de Edificios y Obras Públicas.

148. De acuerdo con la información enviada por el Gobierno del Reino Unido, la situación de la mano de obra se ha modificado mucho desde 1964, como consecuencia de una revisión de salarios por la que se había concedido a los trabajadores gubernamentales un aumento del 90% del salario semanal, el cual había entrado en vigor en julio de 1965. Como consecuencia, se había hundido la industria del lino, que dependía para su supervivencia del bajo nivel de salarios y de un subsidio del Gobierno, pero esto no produjo desempleo, ya que aumentaron las oportunidades de empleo en los proyectos de comunicaciones y de localización de satélites (British Government Cable and Wireless Ltd., U. S. Government and National Aeronautics and Space Administration) en Santa Elena y Ascensión.

Sanidad

149. No se han recibido informes de cambios importantes. Los gastos para sanidad en 1964 se estimaron en 27.762 libras esterlinas, o sea el 10% del presupuesto total del territorio. Hubo una epidemia benigna de varicela.

Situación de la enseñanza

150. Durante el año 1964, el promedio de niños que asistían a la escuela era de 1.184, lo que constituye aproximadamente el 26% de la población de la isla.

151. Había 58 maestros a jornada completa y tres a jornada parcial. Un plan del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial dispone la concesión anual de cinco becas para alumnos-maestros. Estos estudiantes reciben localmente un año de capacitación antes de ser nombrados alumnos-maestros. Después de dos años más enseñando en las escuelas, se seleccionan los candidatos más adecuados para enviarlos a cursos de ultramar de tres años de duración como preparación para recibir el certificado de educación del Reino Unido. En 1964, dos alumnos-maestros seleccionados para capacitación en ultramar según este plan salieron de la isla con dirección al Stranmillis College, Irlanda del Norte. El Gobierno también envía de tiempo en tiempo a maestros de categoría superior a seguir cursillos en el Reino Unido. En 1964, un director de escuela salió para seguir un curso de un año de duración.

152. Los gastos de educación se estimaron en 22.895 libras esterlinas en 1964, es decir, el 8,4% del total de los gastos del Gobierno.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

153. El Comité Especial se ocupó de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena en sus sesiones 396a. y 470a., celebradas el 16 de marzo y el 6 de octubre de 1966. En su 470a. sesión, el Comité Especial tuvo a la vista el informe del Subcomité I sobre estos Territorios, que figura como anexo.

Peticiones escritas y audiencias

154. Se presentaron al Comité Especial las siguientes peticiones escritas sobre la Isla Mauricio y las Islas Seychelles:

Peticionario	Documento
<i>Isla Mauricio</i>	
Sr. M. Ayaperoumall, Presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Isla Mauricio (CPM)	A/AC.109/PET.433
Sr. A. Bhunnoo	A/AC.109/PET.488 y Add.1
Sr. T. Siburun, Secretario General del Mauritius People's Progressive Party	A/AC.109/PET.449 y Add.1 y 2
Sr. S. Ramgoolam, Primer Ministro de la Isla Mauricio y otros doce peticionarios	A/AC.109/PET.479
<i>Islas Seychelles</i>	
Seychelles Transport and General Workers Union Seychelles Building and Construction Workers Union, y Seychelles People's United Party	A/AC.109/PET.533

155. El Comité Especial oyó al siguiente peticionario en relación con la Isla Mauricio:

Sr. T. Siburun, Secretario General del Mauritius People's Progressive Party ... (396a. sesión)

156. El Sr. Teekaram Siburun (Mauritius People's Progressive Party) dio lectura al texto de una petición presentada por su partido al Comité Especial el 30 de agosto de 1965, relativa al establecimiento de bases militares en la Isla Mauricio (A/AC.109/PET.378/Add.1). Señaló que la población de la Isla Mauricio se oponía a la idea de las bases, como había quedado de manifiesto en la demostración de protesta llevada a cabo por 100.000 habitantes en diciembre de 1965. En septiembre de 1965 el Gobierno de la Isla Mauricio había firmado un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido sobre la cuestión de la base militar que los Estados Unidos y el Reino Unido deseaban establecer en Diego García. El Gobierno de la Isla Mauricio no había informado nunca al público acerca del acuerdo concertado con el Gobierno del Reino Unido y el establecimiento de una base militar en el país. El Parti Mauricien había revelado el acuerdo al pueblo después de la caída del Gobierno de coalición. Indicó que su Partido se había formado en 1963, cuando habían empezado a circular los rumores sobre la instalación de una base militar.

157. Además dijo que el desempleo afectaba a toda la Isla Mauricio: de un total de 750.000 habitantes, 100.000 estaban sin trabajo. Los colonizadores blancos poseían todas las mejores tierras y todas las centrales azucareras. Los trabajadores no ganaban lo suficiente para sostener a sus familias; debido a una ley que les prohibía trabajar más de cuatro días por semana, sólo podían ganar veinte rupias semanales. Existía además una crisis de desempleo que el Gobierno no podía resolver.

158. La discriminación racial se practicaba por doquiera. En 1953 el Gobierno del Reino Unido había acordado, en las conversaciones constitucionales, que el Partido Musulmán tendría seis puestos reservados, fuesen o no elegidos. En conformidad con la política del Reino Unido de "dividir para reinar", existían varios partidos políticos que se ocupaban de cada grupo racial.

159. El Mauritius People's Progressive Party formulaba los siguientes llamamientos: primero, que se re-

conociera inmediatamente la independencia incondicional de la Isla Mauricio; segundo, que en su territorio no se estableciera ninguna base militar o de detección de explosiones nucleares; tercero, que las elecciones generales que debían celebrarse en junio de 1966 fueran fiscalizadas por las Naciones Unidas a fin de impedir el soborno y la corrupción.

160. Respondiendo a una pregunta, dijo que se habían celebrado elecciones generales en 1963. Ninguno de los cuatro partidos logró la mayoría, y el Reino Unido impuso en consecuencia un Gobierno de coalición. Añadió que había cincuenta y dos puestos: cuarenta y dos de sus titulares eran elegidos y diez nombrados por el Gobierno. El Parti Mauricien tenía siete puestos, el Independent Forward Bloc, nueve, el Partido Musulmán, seis, y el Labour Party, veinte.

161. Respondiendo a otra pregunta, dijo que su partido había pedido permiso al Gobernador de la Isla Mauricio para participar en la Conferencia Constitucional celebrada en Londres en septiembre de 1965. Se le comunicó que no tenía derecho a ello, y que sólo se permitiría participar a los Ministros del Gobierno que fuesen miembros del Consejo Legislativo. Las peticiones de otros partidos para que se los autorizara a asistir en calidad de observadores también fueron rechazadas.

Declaraciones de los miembros

162. El representante del Reino Unido dijo que las observaciones de su delegación se referirían a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe y se limitarían fundamentalmente a los hechos.

163. Las conclusiones y recomendaciones se subdividían en tres categorías principales: en primer lugar, el progreso constitucional y político de los Territorios de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena; en segundo lugar, la separación del Territorio Británico del Océano Indico de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles; y, en tercer lugar, la situación económica de los Territorios.

164. Con respecto a las cuestiones constitucionales, su delegación ya había informado al Subcomité de las principales medidas adoptadas en cada uno de los tres Territorios. En cuanto a la Isla Mauricio, con arreglo a la Conferencia Constitucional celebrada en noviembre de 1965 se decidió que, si la nueva Asamblea Legislativa que resultase elegida solicitase la independencia, el Gobierno del Reino Unido aceptaría esa solicitud y la independencia sería acordada al cabo de un período de seis meses de plena autonomía de gobierno interno a continuación de las nuevas elecciones. Conforme a las recomendaciones formuladas por un comisionado electoral independiente y después de la visita que subsiguientemente hizo al Territorio un Ministro del Reino Unido para discutir dichas recomendaciones, los partidos políticos de la Isla Mauricio llegaron a un pleno acuerdo sobre un nuevo sistema electoral. Se había iniciado el empadronamiento, con la presencia de un grupo de observadores del Commonwealth, y a principios de 1967 se celebrarían las elecciones. Por consiguiente, si el partido que propugnaba la independencia ganase las elecciones y solicitase la independencia, ésta se lograría aproximadamente a mediados de 1967.

165. En cuanto a las Islas Seychelles, el Consejo Legislativo electo había pedido al Gobierno del Reino Unido que expresara una opinión respecto del deseo de ese

Consejo de que no se produjeran cambios en las relaciones entre el Reino Unido y el Territorio. En su respuesta, el Secretario de Estado del Reino Unido para las Colonias tomó nota de ese deseo y sugirió que había llegado el momento de realizar nuevos progresos constitucionales, incluso adoptando medidas destinadas a abolir las calificaciones de menor cuantía en materia de alfabetismo y posesión de bienes que condicionaban el derecho al voto avanzando así hacia el sufragio universal. Un Comisionado Constitucional había visitado el Territorio para realizar amplias consultas con todos los sectores de la opinión, y se estaban estudiando sus recomendaciones sobre las diversas posibilidades que se ofrecían a las Islas Seychelles para su evolución constitucional.

166. En Santa Elena, el Gobernador había celebrado amplias consultas con todos los sectores de la comunidad, llegándose a un acuerdo virtualmente unánime respecto de una serie de propuestas constitucionales que representarían el traspaso a manos locales de un considerable número de poderes y responsabilidades. Su Gobierno estaba estudiando esas propuestas.

167. No obstante, ninguno de esos progresos había figurado para nada entre las conclusiones y recomendaciones del Comité. Por ejemplo, no se mencionaba la perspectiva de que la Isla Mauricio alcanzara la independencia en un plazo de pocos meses. Tampoco se hacía alusión alguna de los procedimientos consultivos conducentes a nuevas propuestas constitucionales para las Islas Seychelles y Santa Elena. No se hacía siquiera la menor mención de que los miembros del poder legislativo en la Isla Mauricio y en la de Santa Elena ya se elegían por sufragio universal de adultos, ni de que el propio Gobierno del Reino Unido había propuesto medidas conducentes al sufragio universal en las Islas Seychelles. Por cierto que en el informe se afirmaba que el pueblo de las Islas Seychelles estaba "privado" del sufragio universal y, además, se calificaba la evolución política de los Territorios de "lenta". También se recomendaba en el mismo, sin miramientos, que a la mayor brevedad posible se celebraran elecciones libres y basadas en el sufragio universal de adultos, con lo que se eludían totalmente los hechos y las decisiones que se habían adoptado.

168. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la separación de las Islas Mauricio y Seychelles de ciertos pequeños atolones situados en el Océano Indico, su delegación ya había explicado el asunto en la declaración que formuló en la 1558a. sesión de la Cuarta Comisión, el 16 de noviembre de 1965. En esa oportunidad indicó claramente que los nuevos arreglos representaban un reajuste administrativo respecto del cual se había llegado a pleno acuerdo después de celebrar consultas con los gobiernos electos de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles. Esos atolones no formaban ninguna unión geográfica, política ni étnica con dichos Territorios y previamente habían sido administrados como parte de la Isla Mauricio y de las Islas Seychelles simplemente por razones de conveniencia administrativa. Los intereses de sus pocos habitantes — que eran casi todos trabajadores migrantes procedentes de las Islas Mauricio y Seychelles — estaban plenamente protegidos en virtud de los nuevos arreglos. Todavía no se había llegado a ninguna decisión en lo que se refería a la construcción de instalaciones en el Territorio Británico del Océano Indico. La sugerencia (véase párr. 46 *supra*) de que tres ministros del Gobierno de

la Isla Mauricio habían dimitido en protesta contra el principio de los objetivos perseguidos con la separación de los atolones era inexacta, como lo demostraron las declaraciones públicas formuladas por los ministros en esa oportunidad. En vista de que ambos gobiernos electos se habían puesto de acuerdo respecto de la separación, su delegación no podía aceptar las sugerencias contenidas en el informe del Subcomité de que los nuevos arreglos violaban la integridad territorial de los Territorios. Además, su delegación no tenía conocimiento de que existiera prueba alguna que abonara las afirmaciones (véase anexo, párr. 55) acerca de una pretendida inquietud sobre información de que se preveía el establecimiento de bases militares en la Isla Mauricio y en las Islas Seychelles, puesto que no existía ninguna base de esa índole en ninguno de los Territorios y, al leer y entender de su delegación, tampoco existía plan alguno para crear tales bases. Había ciertas instalaciones de menor importancia que no constituían verdaderas bases. Se trataba de la estación naval de radio en la Isla Mauricio, así como de un aeródromo que en algunas ocasiones había sido empleado por la Real Fuerza Aérea pero que se utilizaba principalmente por el Gobierno de la Isla Mauricio con fines exclusivamente civiles. Su delegación no tenía ninguna prueba de que esas pequeñas instalaciones hubieran inquietado a nadie en dichos Territorios.

169. Con respecto al párrafo 63 de las recomendaciones del Subcomité I (véase anexo) la clara posición jurídica había sido, era y seguiría siendo la de que, hasta el momento de la independencia, la Potencia Administradora era la única autorizada para concertar compromisos o acuerdos internacionales que afectaran a los Territorios de ella dependientes. Por consiguiente, su delegación no podía aceptar esa recomendación. No obstante, el orador indicó que, por cierto, el Gobierno del Reino Unido no había concertado recientemente con otros países ningún acuerdo que afectara a los intereses básicos de Territorios coloniales del Reino Unido sin consultar previamente a fondo a los representantes del Territorio interesado.

170. Por último, su delegación lamentaba que ni en el párrafo 57 de las conclusiones ni en el párrafo 64 de las recomendaciones se prestara atención alguna a la información aportada por su delegación al Subcomité acerca de los sistemas económicos de los Territorios y de la ayuda prestada a los mismos por el Gobierno del Reino Unido. Su delegación había hecho constar claramente que 1963 fue un año excepcional por los precios del azúcar, lo que tuvo notables repercusiones sobre la economía de la Isla Mauricio; al interpretar las estadísticas anuales no cabía deducir, de una comparación de las Islas entre 1963 y 1964, que se hubiera producido una declinación económica importante. Añadió que no tenía conocimiento de ninguna prueba que apoyara la afirmación que se hacía en el párrafo 57 de que compañías extranjeras explotan los intereses de los Territorios o actúan de algún otro modo en contra de los mismos. Además, resultaba difícil atribuir significado alguno a la mención de "habitantes autóctonos" que se hacía en el párrafo 64, dado que cuando las islas fueron descubiertas estaban inhabitadas y ningún sector de la población era más "indígena" que los demás.

171. Por consiguiente, en lo que respecta a los tres cargos, las conclusiones y recomendaciones parecían haber caso omiso o tergiversar los hechos básicos e importantes pertinentes a la situación existente en los tres

Territorios de que se trataba. Su delegación no podía aceptar las conclusiones ni las recomendaciones y reservaba la posición de su Gobierno respecto a ellas.

172. El representante de Italia manifestó que en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General su delegación se abstuvo de votar sobre la resolución 2066 (XX) relativa a la cuestión de la Isla Mauricio y votó contra el párrafo de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General que se refiere al pretendido problema de las bases militares en Territorios coloniales. Por consiguiente, reservó la posición de su delegación acerca del informe que se estaba examinando.

173. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que, como miembro del Subcomité I, no se había sorprendido al oír que el representante del Reino Unido no estaba de acuerdo con el contenido del informe, que tenía por objeto corregir las muchas injusticias cometidas por el Gobierno del Reino Unido contra la población de los Territorios de que se trataba.

174. El representante del Reino Unido había hablado acerca del sistema electoral revisado. El representante de Tanzania en el Subcomité I había estudiado la declaración hecha por la delegación del Reino Unido, comprobando que el sistema era sumamente complicado. En efecto, el representante del Reino Unido se había visto obligado a explicar detalladamente el sistema ante el Subcomité.

175. En cuanto a la lentitud de la evolución política que se mencionaba en el párrafo 64 del informe, dado que los Territorios se encontraban bajo el control del Reino Unido desde hacía aproximadamente 150 años, era evidente que deberían haber progresado mucho más. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales fue proclamada en 1960, y seis años más tarde el Reino Unido aún no la había aplicado. Por consiguiente, se justificaba que el Comité hubiera señalado la lentitud de la evolución política. La población de los Territorios reclamaba sus derechos inalienables y soberanos, y el Gobierno del Reino Unido se los negaba. Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones se ajustaban a los hechos.

176. El representante del Reino Unido había dicho que el Territorio Británico del Océano Índico no era parte de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles. La delegación de Tanzania rechazaba ese argumento, puesto que el Gobierno del Reino Unido no habría convenido en pagar indemnización a los habitantes de las islas interesadas si éstas no hubiesen sido parte integrante de las Islas Mauricio y Seychelles.

177. El representante del Reino Unido también había dicho que no estaba de acuerdo con la conclusión del Subcomité acerca del establecimiento de bases militares en las Islas Mauricio y Seychelles. La delegación de Tanzania desearía oír una negativa oficial de dicho representante e incluso propondría que se enviase a los Territorios una misión visitadora encargada de determinar los verdaderos hechos.

178. En conformidad con su tradicional oposición al colonialismo y al neocolonialismo su delegación apoyaba plenamente el párrafo 63 (véase anexo), que se refería a los acuerdos que la Potencia Administradora había concertado con otras Potencias y que afectaba a la soberanía y a los derechos fundamentales de esos Territorios.

179. El representante de Australia dijo que, basándose en los hechos que acababa de exponer el repre-

sentante del Reino Unido, su delegación estimaba que las conclusiones y recomendaciones del informe no tenían fundamento. Por lo tanto, se reservaba completamente su posición sobre el informe.

180. El representante de Dinamarca declaró que las reservas que su delegación había expresado en la 32a. sesión del Subcomité I seguían siendo válidas.

181. El representante de los Estados Unidos de América dijo que su delegación no apoyaba todas las conclusiones y recomendaciones que figuraban en el informe. En particular, hacía suyas las reservas formuladas por el representante danés en la 30a. sesión del Subcomité.

182. La delegación de los Estados Unidos estimaba enteramente injustificada la importancia que se atribuía a las instalaciones militares, especialmente a la luz de las observaciones hechas por el representante del Reino Unido.

183. En cuanto a la alusión al párrafo 12 de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, los miembros recordarían que en la fecha de la aprobación de esa resolución, la delegación de los Estados Unidos advirtió que algunos párrafos eran nulos e inválidos, por no haberse aprobado de conformidad con las disposiciones de la Carta.

184. Por último, en el informe no se tenían suficientemente en cuenta los esfuerzos de la Potencia Administradora y del pueblo de los Territorios encaminados a lograr la libre determinación, ni la posibilidad de que la Isla Mauricio pudiera llegar a ser independiente a mediados de 1967.

185. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no compartió el criterio del representante de Australia de que fundándose en los hechos que acababa de enumerar el representante del Reino Unido, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité carecían de fundamento. Cuando en 1964, el Subcomité I, el Comité Especial y la Asamblea General estudiaron a fondo la cuestión de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena, el representante del Reino Unido pintó un cuadro promisorio de la situación pero pese a ello la triste verdad se había revelado. En la misma sesión 470a., el representante del Reino Unido había opuesto objeciones al hecho de que en el informe no se aludiera a los adelantos políticos y económicos del Territorio y había considerado erróneas las recomendaciones, especialmente las relativas a las bases militares. El Sr. Shakhov convenía con el representante de Tanzania en que en los seis años transcurridos desde que se aprobó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el progreso había sido efectivamente lento, ya que la Declaración no se aplicaba todavía en los Territorios.

186. En cuanto a la situación económica, los monopolios extranjeros privaban a los habitantes locales de la oportunidad de participar en la vida económica de los Territorios. Toda la tierra de las Islas Mauricio que no pertenecía a la Corona estaba en manos de las compañías extranjeras y de los grandes terratenientes, y dos terceras partes de toda la tierra cultivable en las Islas Seychelles pertenecían a un pequeño grupo de colonos. La estructura colonial de la economía de los Territorios, que se basaba principalmente en el monocultivo, los hacía depender enteramente del país metropolitano.

187. El representante del Reino Unido había dicho que no se había tenido en cuenta el progreso alcanzado. Con todo, incluso en el documento de trabajo preparado por la Secretaría que — debía reconocerse — era objetivo, se indicaba que en 1964 la producción total de las industrias agrícola y manufacturera había disminuido y que en 1965 la situación económica en general había seguido empeorando (véanse párrs. 55 y 59 *supra*). Según el *Christian Science Monitor* del 6 de junio de 1965, de una población total de más de 750.000 habitantes en la Isla Mauricio menos de 100.000 estaban empleados y la mayor parte de éstos en trabajo estacional. En el documento de trabajo de la Secretaría se había aludido asimismo al creciente nivel del desempleo. En protesta contra la desesperada situación económica, los habitantes organizaron huelgas. En mayo de 1965, ocurrieron en la Isla Mauricio serios disturbios que, según el *Christian Science Monitor*, fueron apaciguados por tropas británicas. En junio de 1966 la Potencia colonial, con la ayuda de unidades militares de Adén y de fuerzas navales del Reino Unido, puso fin a una huelga en las Islas Seychelles. El representante del Reino Unido no había mencionado estos incidentes que eran, sin embargo, otro ejemplo del empleo criminal de las bases militares contra un pueblo que lucha por la libertad y la independencia y por alcanzar un nivel de vida mejor. En vez de ello, el representante del Reino Unido había reservado la posición de su delegación respecto a la cuestión de las bases militares y había afirmado que éstas no impedían el progreso de la población.

188. En el documento de trabajo de la Secretaría (véase párr. 148 *supra*) se aludía al hecho de que el Reino Unido y los Estados Unidos utilizaban Santa Elena y la Isla de la Ascensión para comunicaciones espaciales y proyectos para seguir la huella de cohetes orbitales, y en *The Times* de Londres del 14 de febrero de 1966 se había publicado la noticia de que la Isla de la Ascensión podría quizás utilizarse como base para los bombarderos F. 111. En el documento de trabajo de la Secretaría se citaba lo dicho por el Secretario de Estado del Reino Unido para las Colonias acerca del establecimiento del Territorio Británico del Océano Índico y de los planes para la construcción de instalaciones de defensa en esas islas (véase párr. 41 *supra*); sin embargo, el representante del Reino Unido había afirmado que no existían tales planes. Tanto el *Scotsman*, periódico del Reino Unido, como *Time*, revista de los Estados Unidos, habían informado que el Territorio podría utilizarse como base para submarinos atómicos y aviones de bombardeo e incluso como plataforma para el lanzamiento de cohetes. En una petición, el Presidente del People's United Party de Seychelles (A/AC.109/PET.321) había protestado contra la perspectiva de instalar una base militar angloamericana en el Territorio, y en el documento de trabajo de la Secretaría se describía el descontento entre los habitantes de la Isla Mauricio por el plan mencionado (véase párr. 47 *supra*). Los Gobiernos y pueblos de muchos países independientes se oponían vigorosamente a la construcción de tales bases, que representaban una tentativa encaminada a perpetuar el sistema colonial y constituían una amenaza a la independencia de los países y a la paz y la seguridad de los pueblos.

189. En el documento de trabajo de la Secretaría (véase párr. 48 *supra*) figuraba una cita de la declaración del Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido según la cual su Gobierno no se proponía hacer

ninguna modificación en el plan de establecer en el Territorio Británico del Océano Indico una base militar angloamericana después de aprobada la resolución 2066 (XX) por la Asamblea General. Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido no sólo no había aplicado la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales sino que había infringido la integridad territorial de los Territorios de que se trataba. La política del Reino Unido contaba con el apoyo incondicional del Gobierno de los Estados Unidos, que ejercía presión sobre el Reino Unido para mantener una presencia al este de Suez.

190. Se decía que el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a pagar una indemnización por la parte del Territorio Británico del Océano Indico que pertenecía a la Isla Mauricio. El derecho de un pueblo a la libre determinación no podía estar sujeto a permuta y la transacción del Reino Unido debía condenarse ya que tenía por objeto transformar un territorio en base para la agresión contra los pueblos de Asia y África.

191. Las recomendaciones del Subcomité I habían obedecido a las condiciones existentes en los Territorios. Sólo su aplicación incondicional permitiría a los habitantes de las Islas Mauricio, Seychelles y Santa Elena ejercer su derecho a la libre determinación y expresar libremente sus deseos respecto a la futura condición jurídica de los Territorios. Las conclusiones y recomendaciones presentadas por el Subcomité I habían sido confirmadas plenamente por los hechos de que se disponía y constituían el mínimo aceptable para el Comité Especial.

192. El representante de Siria preguntó al representante del Reino Unido por qué la Isla Mauricio no era aún independiente a pesar de que el Primer Ministro del Territorio había declarado inequívocamente que estaría listo para la independencia a mediados de 1964. El representante del Reino Unido había dicho que se concedería la independencia a mediados de 1967, pero esa declaración iba acompañada de tantas condiciones que no había convencido al Subcomité. El representante de Siria habría deseado saber si el representante del Reino Unido podría asegurar que la Potencia Administradora estaba dispuesta a conceder la independencia sin condiciones.

193. Con respecto a la cuestión del progreso constitucional, el orador no podía comprender las ventajas del complejo sistema electoral implantado por la Potencia Administradora. Esas disposiciones constitucionales debieran dejarse al criterio de los habitantes mismos para que éstos las decidiesen después de la independencia.

194. En cuanto a las bases militares, la declaración del representante del Reino Unido reforzaba el temor, por el hecho de que las negociaciones con los Estados Unidos se referían únicamente a ciertas instalaciones. Las negociaciones eran, al parecer, secretas y por consiguiente no se había obtenido el consentimiento del pueblo. Se había preguntado al representante del Reino Unido cuáles eran los representantes del pueblo de la Isla Mauricio que habían participado en las negociaciones, pero el representante no había respondido.

195. El ritmo del progreso debiera considerarse teniendo en cuenta los 156 años de dominación colonial. Bajo esa luz, el progreso había sido en efecto lento.

196. Como observación general, el representante de Siria preguntó qué significan las reservas de ciertas

Potencias acerca de las recomendaciones de las Naciones Unidas que se fundaban en hechos. Las Potencias que tenían posibilidad de hacerlo no hacían nada para aliviar los padecimientos de los pueblos coloniales de que se trataba y esa actitud impedía asegurar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.

197. El representante del Reino Unido, en su respuesta al representante de Siria, repitió su declaración de que si el partido a favor de la independencia triunfaba en las elecciones y la pedía, la independencia podría obtenerse a mediados de 1967. Por lo tanto, no había sino una condición para la independencia en esa fecha, a saber, que el pueblo decidiera pedirla por conducto de sus representantes recién elegidos.

198. El representante de la URSS había dicho que la delegación del Reino Unido no había mencionado las huelgas que habían estallado en las Islas Seychelles. Lejos de omitir tal información, su delegación había señalado a la atención del Subcomité los términos en que se habían resuelto las huelgas en las Islas Seychelles (véase párr. 24 del anexo). Según creía haber entendido, el representante de la URSS había dicho también que la huelga en la Isla Mauricio había sido reprimida por tropas británicas. El hecho es que cuando algunos soldados británicos habían ido a la Isla, muchos habitantes de la localidad habían aplaudido el desembarco de un pelotón y que se habían tranquilizado al verlo, que a continuación se habían celebrado varios partidos de fútbol y que la visita había sido enteramente cordial.

199. El representante de la URSS había hablado mucho acerca del Territorio Británico del Océano Indico. El orador nada tenía que agregar a las varias declaraciones de su delegación sobre el asunto y pidió a los miembros del Comité Especial que dirigieran su atención a esas declaraciones y que no especularan sobre los informes mencionados por el representante de la URSS.

200. En cuanto a las observaciones relativas al ritmo lento de progreso en los Territorios, a juicio de su delegación la única medida válida para estimar la rapidez del adelanto político era el deseo de los habitantes de los Territorios mismos. Según esa medida, el progreso no había sido lento por cierto. El representante de Tanzania podía discrepar con los habitantes de los Territorios respecto a los deseos de éstos, pero la Potencia Administradora estaba igualmente en libertad de fundarse en los deseos de los habitantes y no en los pareceres expresados por los representantes de Tanzania, de la URSS y de Siria.

201. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que no se había atribuido el derecho a hablar en nombre de los habitantes de los Territorios pero que el Reino Unido tampoco tenía derecho a hacerlo. Su país hablaría siempre en apoyo de los derechos de todos los pueblos a controlar su propio territorio nacional y a ejercer sus derechos soberanos; asimismo consideraba que tenía el deber de oponerse a todos aquellos que cometían agresiones o se anexaban otros territorios.

202. El representante de Polonia agradeció a los miembros del Subcomité I su lúcido informe. Le agradó sobre todo que el Subcomité hubiera concentrado su atención en la aplicación — o más bien la no aplicación — de la resolución 2066 (XX) de la Asamblea General. Compartió sin reservas los puntos de vista expresados en el Subcomité por el representante de Siria, el cual señaló que los motivos del Gobierno del

Reino Unido eran dos: asegurar la permanencia de los privilegios de la minoría de los colonos y utilizar los Territorios para fines estratégicos contra los deseos de los habitantes de las Islas. No tenía importancia que se llamara a las bases "pequeñas instalaciones"; el hecho es que existían instalaciones militares y que había planes para ampliarlas, según había informado la prensa del Reino Unido y de los Estados Unidos y según la información contenida en el documento de trabajo de la Secretaría. Añadió que le agradaría oír del representante del Reino Unido una declaración explícita en el sentido de que esa información era falsa y de que en los Territorios no había ni habría en el futuro instalaciones militares.

203. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General había aprobado la resolución 2066 (XX), que contenía disposiciones concretas que debía cumplir el Reino Unido para permitir a los habitantes de los Territorios el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 (XV). En las conclusiones y recomendaciones contenidas en los párrafos 53 a 64 del informe del Subcomité, se ampliaban las medidas que debían tomarse y que eran únicamente la consecuencia lógica de las conclusiones del Subcomité. Convenía presentar a la Asamblea General un proyecto de resolución en esos términos. Su delegación apoyaba sin reservas las recomendaciones, sobre todo aquellas en las cuales se pedía a la Potencia Administradora que respetara la integridad territorial de las Islas Mauricio y Seychelles y que se abstuviera de establecer bases militares en ellas.

D. DECISIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ESPECIAL SOBRE EL INFORME DEL SUBCOMITÉ I

204. En su 470a. sesión, celebrada el 6 de octubre de 1966, el Comité Especial aprobó sin objeciones el informe del Subcomité I sobre las Islas Mauricio, Seychelles y Santa Elena, y suscribió las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo (véanse párrs. 53 a 64 del anexo), en la inteligencia de que las reservas expresadas por algunos miembros quedarían reflejadas en las actas.

ANEXO

[A/AC.109/L.335]

Informe del Subcomité I

ISLA MAURICIO, ISLAS SEYCHELLES Y SANTA ELENA

Relator: Sr. Rafic JOUÉJATI (Siria)

INDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-3
EXAMEN POR EL SUBCOMITÉ	4-65
A. Declaraciones de los miembros	4-52
B. Conclusiones	53-57
C. Recomendaciones	58-64
D. Aprobación del informe	65

INTRODUCCIÓN

1. El Subcomité examinó los Territorios de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena en sus sesiones 28a., 29a., 30a. y 32a., celebradas los días 12 de agosto y 9, 12 y 19 de septiembre de 1966.

2. El Subcomité tuvo a la vista los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XIV, párrs. 1 a 152).

3. De conformidad con el procedimiento convenido por el Comité Especial, el Presidente invitó al representante del Reino Unido a participar en el examen de los tres Territorios. En consecuencia, el representante del Reino Unido participó en las sesiones 29a., 30a. y 32a. del Subcomité.

EXAMEN POR EL SUBCOMITÉ

A. Declaraciones de los miembros

4. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recordó que la situación de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena había sido examinada muy a fondo por el Subcomité, el Comité Especial y la Asamblea General en 1964. Este examen había permitido poner al descubierto la verdadera situación reinante en dichos territorios y revelado que la Potencia Administradora no había aplicado en ellos las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, sino que, al contrario, había hecho todo lo posible para frenar el logro de su independencia.

5. Desde el punto de vista económico y social, la situación de la población de dichas islas era deplorable. La Potencia Administradora les había privado de las riquezas que les pertenecían por derecho y les había denegado toda posibilidad de progreso económico con las concesiones hechas a monopolios extranjeros. En la Isla Mauricio y en las Islas Seychelles, por ejemplo, las dos terceras partes del conjunto de tierras cultivables habían sido cedidas a grupos de plantadores. Al carecer de tierras, los habitantes tenían que buscar trabajo en las plantaciones, donde recibían un mísero salario o bien arrendar tierras. Todavía se practicaba en gran escala el monocultivo, lo cual hacía que los territorios dependieran totalmente de la metrópoli. El nivel de vida de los habitantes seguía bajando. La población estaba reducida a la desesperación y el descontento aumentaba de día en día. En mayo de 1965, habían estallado graves conflictos en la Isla Mauricio donde la situación económica no había cesado de deteriorarse y la Potencia Administradora había hecho intervenir al ejército para reprimir los movimientos de protesta. En junio de 1966 se declaró una huelga en las Islas Seychelles, y el Gobierno del Reino Unido llevó unidades militares de Adén para dispersar a los huelguistas e impedir que manifestasen su descontento. Así, pues, era claro que la Potencia Administradora hacía caso omiso de las recomendaciones de la Asamblea General y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Por consiguiente, el Comité Especial y la Asamblea General debían proseguir el examen de la cuestión y formular recomendaciones encaminadas a obligar al Reino Unido a adoptar sin demora las medidas necesarias para permitir que esos territorios alcanzaran inmediatamente su independencia, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

6. La renuencia de la Potencia Administradora tenía motivos estratégicos. La constitución del nuevo Territorio Británico del Océano Índico que sería la base de un sistema de seguridad anglo norteamericano constituía una amenaza dirigida contra los países de África y Asia y justificaba plenamente los temores expresados por los países no alineados en la Conferencia de El Cairo. La población se oponía a que esos territorios se convirtieran en baluartes defensivos destinados no solamente a reprimir los movimientos nacionalistas en las propias islas, sino también a ser utilizados por los colonialistas contra los que luchaban por la libertad de esa región del mundo. En una petición (A/AC.109/PET.321) del Presidente del Seychelles People's United Party se protestaba contra la construcción de una base militar y en la Isla Mauricio se habían realizado manifestaciones por las mismas razones (véase cap. XIV, párr. 47). En el periódico *The Times* de Londres del 14 de febrero de 1966, se informaba que se trataba de construir una base aérea en la isla de Ascensión. Según un artículo de la revista norteamericana *Time*, del 19 de diciembre de 1965, ciertos atolones vecinos podrían servir de base para submarinos equipados con

proyectiles Polaris. La creación en el Océano Indico de nuevos focos de agresión habían suscitado la indignación del pueblo indio, entre otros, ya que si esos proyectos amenazaban la independencia de algunos pueblos, también hacían peligrar la paz mundial. El Gobierno del Reino Unido no se proponía modificar su proyecto de base militar en dichas islas (véase cap. XIV, párr. 48), lo que constituía un verdadero desafío de parte del Reino Unido contra las Naciones Unidas, pues no solamente no tomaba ninguna medida para aplicar la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV), sino que no respetaba la integridad territorial de las islas y hacía caso omiso de las disposiciones de la resolución relativas al desmantelamiento de las bases militares. Bastaba leer la prensa para comprobar que el Reino Unido se sentía alentado por los Estados Unidos y por otras Potencias imperialistas; en el momento en que se celebraban en Washington en 1966 conversaciones entre los Ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido y de los Estados Unidos acerca de la construcción de bases militares, el Gobierno australiano anunciaba que se dedicarían grandes sumas a operaciones militares en Papua y Nueva Guinea.

7. Con objeto de eliminar lo más rápidamente posible al colonialismo de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena, la delegación de la Unión Soviética sugirió al Subcomité que recomendara al Comité Especial la adopción de las medidas siguientes: 1) reafirmación del derecho a la libre determinación y a la independencia de la Isla Mauricio, de las Islas Seychelles, de Santa Elena y de los territorios que de ellas dependen; 2) organización de elecciones basadas en el sufragio universal de adultos; 3) constitución, después de las elecciones, de órganos representativos que ejercieran todos los poderes; 4) restitución a la población autóctona de todas las tierras; 5) salvaguarda del derecho de los autóctonos a disponer de todos los recursos naturales de su territorio; 6) eliminación de las bases militares; 7) abrogación de todos los acuerdos impuestos a esos Territorios que limitaren la soberanía y los derechos fundamentales de esos pueblos; 8) abstención, de parte de las empresas de la metrópoli de todo recurso a medidas que vulnerasen la integridad de dichos territorios; 9) condenación del empleo de toda base militar.

8. Añadió que la delegación de la URSS apoyaría todas las recomendaciones que adoptase el Comité Especial con dichos fines.

9. El representante de Siria hizo observar que, a pesar de las recomendaciones claras y precisas formuladas en 1965 por el Subcomité, y aprobadas luego por el Comité Especial, resultaba indispensable una vez más examinar la cuestión de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena, dada la actitud de la Potencia Administradora, que, no obstante sus protestas, no se mostraba dispuesta a traspasar los poderes a los representantes democráticamente elegidos de la población. Dijo que no creía que esas contemporizaciones tuviesen por fin preparar más eficazmente los Territorios a la independencia y la libre determinación. De hecho, la Potencia Administradora poco contribuía a acelerar el proceso de emancipación, y subordinaba la noción de independencia a toda clase de condiciones que hacían dudar de su buena fe a ese respecto. Las reformas introducidas en los últimos años obedecían únicamente a la iniciativa y los esfuerzos del Gobierno autóctono. En verdad, en 156 años de presencia británica nada importante se había hecho por asegurar el bienestar de las masas populares, que vivían bajo un clima sumamente desfavorable, para desarrollar la enseñanza o formar en los Territorios un cuerpo de funcionarios competentes y capaces de asumir las funciones de gobierno, del desarrollo y de la industrialización.

10. El orador opinó que el objetivo del Gobierno del Reino Unido era doble: garantizar la permanencia de los privilegios de la pequeña minoría constituida por los colonos y utilizar los Territorios para fines estratégicos contrarios a las aspiraciones de la población de las islas y regiones vecinas. Por su parte, Siria consideraba en extremo inquietantes los datos proporcionados por el representante de la Unión Soviética acerca del plan angloamericano de establecer bases militares en las islas García; esa cuestión debía ser examinada concienzudamente por el Comité Especial para determinar su gravedad.

11. Preguntó por qué la Potencia Administradora insistía en mantener los poderes anacrónicos del Gobernador — un extranjero ajeno a la cultura, las ideas y las aspiraciones del país — quien nombraba y despedía sin tener en cuenta en lo más mínimo los consejos de la Comisión de la administración pública, privaba a los representantes autóctonos de su legítimo derecho a asumir la responsabilidad de su seguridad interior y hacerse cargo de sus relaciones internacionales y quien, aun cuando debía acatar la opinión del Consejo Ejecutivo, no por ello debía de estar autorizado a obrar contrariamente a ellas.

12. Dijo que no veía por qué más de un cuarto de los representantes de la nación eran designados por el Gobernador y no elegidos por el pueblo, y por qué correspondía al Gobernador y no a los propios representantes elegir al Presidente de su Asamblea; por qué adoptaba el Gobernador decisiones en última instancia en materia de gastos, cuando el desarrollo de la isla exigía inversiones considerables; por qué las leyes sólo podían entrar en vigor con su anuencia y, peor aún, por qué un proyecto de ley rechazado por el legislativo podía ser promulgado por él si así lo deseaba.

13. Desde luego, la Potencia Administradora tenía una respuesta preparada a estas preguntas: el país no era aún independiente, no estaba sino en la etapa experimental de la autonomía interna. Era indudable que la Potencia Administradora, invocando razones aparentemente plausibles de equilibrio, objetividad y de sentido común, quería dar a entender que los Territorios no estaban listos para la independencia y la libre determinación. Por su parte, el Comité Especial era sumamente escéptico en cuanto a la supuesta rapidez del proceso de preparación iniciado por la Potencia Administradora; estaba firmemente convencido, además, de que los problemas que planteaban la pobreza, el subdesarrollo, el analfabetismo, la división de la sociedad entre ricos y pobres y la injusticia social no podían ser resueltos por la Potencia Administradora, pero que lo serían por los propios habitantes cuando, una vez independientes, pudieran determinar libremente su propio destino, su forma de gobierno y la manera de atender sus necesidades, y cuando recibieran la asistencia de la comunidad de las naciones en condiciones de igualdad, equidad y dignidad. Dijo que cabía confiar en el Ministro principal, Sr. Ramgoolam, cuando afirmaba que su país debía haber obtenido la independencia a mediados de 1964, y no en la Potencia Administradora que, so pretexto del necesario proceso de evolución constitucional, seguía negando a esos pueblos el ejercicio de sus derechos legítimos.

14. El representante de Malí indicó que la situación de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena era para su Gobierno motivo de grave preocupación. En la Isla Mauricio existía un problema racial que la Potencia Administradora había mantenido con el designio de perpetuar su dominación según el principio de dividir para reinar. En ese principio se había basado el Gobierno del Reino Unido al encargar a la Comisión Banwell que formulara recomendaciones sobre el sistema electoral.

15. Por su parte, la posición de Malí era que la constitución de un país y todos los asuntos que con ella guardasen relación eran esencialmente de la incumbencia del pueblo de tal país. La Potencia Administradora no tenía derecho a supe- ditar la concesión de la autonomía y la independencia a la existencia de un acuerdo total de los partidos políticos sobre una constitución que no correspondiese a las aspiraciones legítimas de los autóctonos. A juicio del orador el establecimiento de la Comisión Banwell no era sino una maniobra destinada a perpetuar la presencia del Reino Unido en el Territorio con el único fin de explotar mejor sus riquezas y su población. Mientras los naturales de la Isla Mauricio daban su atención a los problemas constitucionales, las compañías británicas continuaban saqueando el país, cuya economía estaba en una situación desastrosa. A este respecto el análisis no podía limitarse a la Isla Mauricio; debía también examinarse la situación de las Islas Seychelles y de Santa Elena, territorios que, por su situación geográfica, gozaban de un clima ideal para un cultivo diversificado. Sin embargo, las plantaciones de caña de azúcar ocupaban una superficie de 215.800 acres y la de té 6.600 acres, lo que sólo dejaba para otros cultivos de subsistencia una superficie de 17.600 acres; en consecuencia, los habi-

tantes de la Isla Mauricio, como también los de las Islas Seychelles y de Santa Elena, tenían que importar del Reino Unido y de otros países sus productos alimenticios. No debía extrañar, pues, el retroceso de la economía de la Isla Mauricio a que se alude en el documento de trabajo. En el cuarto trimestre de 1965, en efecto, la deuda pública era de 264 millones de rupias, es decir, 18 millones más que en el trimestre correspondiente de 1964. Esta pérdida para los territorios aumentaba los excesivos beneficios de las sociedades británicas, y por ello la Potencia Administradora se negaba a concederles autonomía e independencia. Caba observar que las exportaciones de azúcar habían bajado de 334.200.000 rupias en 1964 a 289.700.000 rupias en 1965, mientras las compañías británicas habían incrementado sus ganancias. Sin embargo, en la Isla había desempleo y el Gobierno aconsejaba a los autóctonos que se expatriaran y trabajaran en otros lugares, con objeto de poder utilizar mejor la Isla con fines militares. Convenía recordar a este respecto la declaración del peticionario relativa al propósito del Reino Unido y de los Estados Unidos de establecer en la Isla una base militar de agresión. No dejaba de ser interesante recordar asimismo la reciente declaración del Primer Ministro del Reino Unido, según la cual toda Potencia llamada a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz organizadas por las Naciones Unidas debía poder intervenir sobre el terreno o estar en situación de trasladarse a él, y que el Reino Unido no podía desconocer que sus asociados deseaban verlo en condiciones de ejercer en Asia y en África una influencia adecuada para neutralizar los focos de infección actuales o posibles. Según el propio Sr. Wilson, el Gobierno del Reino Unido trataba de abandonar el sistema de las grandes bases militares situadas en regiones pobladas para instalarse en regiones casi inhabitadas desde las cuales sus fuerzas pudiesen transportarse rápida y económicamente al teatro de operaciones. A juicio del orador, esa declaración, habida cuenta, en particular, de lo ocurrido dos años antes en la Isla de la Ascensión, no exigía comentario.

16. Malí, por su parte, se pronunciaba contra las bases militares de agresión, que impedían a los pueblos pacíficos de los Territorios, especialmente de la Isla Mauricio, de las Islas Seychelles y de Santa Elena, ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia. Por lo tanto, su delegación hacía un nuevo llamamiento a la Potencia Administradora para que cumpliera sus obligaciones permitiendo que los autóctonos alcanzaran la independencia, según su deseo libremente expresado, en óptimas condiciones. En cuanto al problema constitucional, no debía ser un freno para la concesión de la autonomía en una primera etapa, entendiéndose que el Territorio debería lograr la independencia cuanto antes. El establecimiento de la base militar en la región constituía un acto ilegal. El Reino Unido tenía el deber de dismantelar esa base y de construir en su lugar hospitales y escuelas, que la población sin duda necesitaba mucho más.

17. El representante del Reino Unido dijo que presumía que la intervención del representante de la URSS en la 28a. sesión del Comité Especial, el 12 de agosto, según constaba en el acta resumida provisional, tendría que ser objeto de una considerable revisión. Las nuevas disposiciones administrativas relativas a ciertas islas pequeñas constituían un reajuste administrativo libremente negociado por los gobiernos y los representantes elegidos de los Territorios. Los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos todavía no habían adoptado ninguna decisión respecto de la construcción e instalaciones en ningún lugar del Territorio Británico del Océano Indico.

18. Añadió que, como el representante de la Unión Soviética había sugerido al Subcomité que recomendara al Comité Especial la adopción de medidas para que se restituyeran todas las tierras a la población de esos Territorios y se salvaguardasen sus derechos sobre los recursos naturales de las islas, quería recordar que la delegación del Reino Unido ya había precisado que los primeros habitantes de la Isla Mauricio y de las Islas Seychelles procedían de Francia, y de Inglaterra los de Santa Elena. Preguntó si al hablar de autóctonos, el representante de la Unión Soviética se refería a las drontas y tortugas, únicos pobladores de esas islas antes de la llegada de los europeos.

19. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General la Cuarta Comisión examinó el caso de la Isla Mauricio. El orador recordó que la Comisión Electoral creada en diciembre de 1965 y presidida por Sir Harold Banwell había recomendado en febrero de 1966 que se dividiese la Isla en veinte circunscripciones, cada una de las cuales elegiría tres diputados, y que se formase otra circunscripción con Rodrigues, que elegiría dos diputados, con lo que habría sesenta y dos escaños provistos por sufragio directo; además se cubrirían otros cinco escaños para introducir un elemento compensatorio: a los partidos que hubieran obtenido el mayor número de votos por escaño se atribuiría un puesto suplementario que correspondería al candidato que obtuviese más votos sin llegar a ser elegido y perteneciese al grupo étnico peor representado. Sin embargo, cada partido debía obtener el 10% de los sufragios y un escaño por lo menos para tener derecho a uno de los cinco puestos suplementarios. Asimismo, con arreglo a otro elemento compensatorio, a cualquier partido que obtuviese el 25% de los votos se le aumentarían sus escaños hasta el 25% de ser necesario, gracias al nombramiento, para el órgano legislativo, del número requerido de candidatos que hubiesen obtenido más votos sin llegar a ser elegidos. El Gobierno del Reino Unido había aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Banwell, pero los tres partidos que formaban el Gobierno de coalición formularon objeciones. Sólo el jefe del partido de la oposición, el Parti Mauricien Social Démocrate, había acogido favorablemente el informe. Las críticas se referían principalmente a los "elementos compensatorios" encaminados a dar a las minorías de la Isla la garantía de que tendrían una representación adecuada en el Parlamento y las cláusulas esenciales de la Constitución no podrían, por ende, modificarse sin su consentimiento.

20. Durante una visita realizada a la Isla Mauricio por un Ministro británico se logró el acuerdo de todos los partidos políticos respecto a un sistema de setenta escaños en 20 circunscripciones de tres diputados; 60 diputados serían provistos por votación de lista, debiendo cada elector hacer uso de los tres votos de que dispondría; Rodrigues elegiría a dos representantes por ese método. Además, se reservarían ocho escaños a los "perdedores calificados" (candidatos no elegidos, pero con determinado número de votos). Los cuatro primeros escaños corresponderían, sin distinción de partido, al grupo étnico que al finalizar la elección quedase insuficientemente representado en la Asamblea Legislativa, con o sin el porcentaje mínimo de sufragios. Los cuatro últimos escaños para "perdedores calificados" sin ningún requisito para un número mínimo de escaños se repartirían entre los partidos. Mediante ese sistema podría lograrse una distribución equitativa de los escaños entre los grupos étnicos, por una parte, y los partidos, por otra. La inscripción en los registros electorales debía empezar el 5 de septiembre, pero con motivo del Ramadán las elecciones no se podrían celebrar hasta febrero de 1967. Si la mayoría del órgano legislativo se pronunciaba a favor de la independencia, la Isla Mauricio podría obtenerla al cabo de seis meses de autonomía interna, es decir, en el verano de 1967.

21. En conformidad con las recomendaciones de la Comisión Banwell, se había constituido un grupo de observadores del Commonwealth bajo la presidencia de Sir Colin McGregor, ex presidente del Tribunal Supremo de Jamaica. Algunos miembros de ese grupo quizás estarían en la Isla al abrirse los registros electorales.

22. Añadió el orador que la creación de la Comisión Banwell no había sido una maniobra dilatoria, como había sugerido el representante de Malí, puesto que finalmente se había logrado un acuerdo y la independencia estaba supeditada al resultado de las elecciones. Ese procedimiento era el más adecuado, dadas las divergencias de opinión sobre el futuro estatuto del Territorio. El Gobierno del Reino Unido seguía estimando que la independencia era la solución acertada y haría todo lo que pudiera para que la Isla Mauricio se independizara cuanto antes.

23. Respecto de la situación económica de la Isla Mauricio, mencionada en el documento de trabajo, señaló que el año 1963 había sido, en ciertos aspectos, un año excepcional. La producción de azúcar, en particular, alcanzó cifras sin pre-

cedentes y las exportaciones llegaron a un nivel excepcional a causa de la escasez mundial de azúcar. En realidad, aunque en 1964 los ingresos de la exportación de azúcar fueron inferiores a los de 1963, superaron los de 1961 y de 1962. En el año 1965 se registró un nuevo aumento de la producción azucarera respecto de 1964. Los Gobiernos de la Isla Mauricio y del Reino Unido habían adoptado medidas para que el desarrollo económico de la primera continuara a un ritmo satisfactorio. Además de los préstamos y subvenciones que concedía (6.700.000 dólares asignados para desarrollo en 1965-68 y casi 13 millones de dólares en nuevos subsidios y préstamos para reconstrucción de lo dañado por el ciclón), convenía recordar que aplicaba a la Isla Mauricio un arancel preferente en virtud del *Commonwealth Sugar Agreement*, lo que le permitía vender a precios muy favorables (actualmente más de 47 libras esterlinas por tonelada, precio que se comparaba con el internacional de unas 17 libras esterlinas la tonelada) alrededor del 75% del azúcar que exportaba.

24. En lo que respectaba a las Islas Seychelles, recordó cómo había evolucionado la situación desde julio de 1964, y señaló a la atención del Subcomité el telegrama dirigido al Gobernador de las Islas Seychelles por el Secretario de Estado para las Colonias, cuyo tenor se indicaba en el documento de trabajo (véase cap. XIV, párr. 98). El Consejo Legislativo había pedido al Gobierno del Reino Unido que respondiera a su propuesta de que el Territorio continuara siendo británico o se integrara con el Reino Unido. El Secretario de Estado para las Colonias había contestado reconociendo el deseo del Consejo de no modificar la actual vinculación y sugiriendo que el Territorio abandonara las calificaciones menores exigidas para votar y adoptara el sufragio universal. Sugirió también la distribución de las responsabilidades de algunos departamentos del Gobierno entre los miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo y la designación de un Comisionado Constitucional que visitaría las Islas Seychelles y consultaría todas las diversas opiniones, incluso partidos e individuos, antes de informar sobre la evolución constitucional futura del Territorio. De conformidad con esa sugerencia se había designado el Comisionado, quien había visitado las Islas Seychelles y presentado su informe, que se consideraba a la sazón. Habían estallado huelgas en las Islas Seychelles, pero tras la decisión de aumentar provisionalmente los salarios en un 11,1% se había reanudado el trabajo mientras proseguían las negociaciones. La delegación del Reino Unido creía que estas informaciones respondían a las observaciones del representante de Siria sobre los bajos salarios de las Islas Seychelles.

25. Las Islas Seychelles recibían, en virtud de las *Colonial Development and Welfare Acts*, una ayuda acrecentada del Reino Unido en forma de préstamos y subvenciones, parte de los cuales se destinaban a fomentar el desarrollo de la Isla (3.360.000 dólares para 1966-1968) y el resto a equilibrar el presupuesto.

26. Varios hechos nuevos en la situación económica y social de Santa Elena se habían registrado desde 1964, y se los describía brevemente en el documento de trabajo. Por ejemplo, los salarios de los peones empleados por el Gobierno se habían aumentado en un 90% a partir de julio de 1965. Esa medida había desbaratado la industria del lino, pero no había entrañado desempleo al brindar nuevos oportunidades de trabajo.

27. Indicó que el Gobernador de Santa Elena había transmitido al Secretario de Estado para las Colonias una comunicación en la que señalaba las consultas que había celebrado con elementos representativos de la población acerca de la evolución constitucional de la Isla. El Consejo Consultivo había aprobado una resolución en que celebró el proyecto de revisión de la Constitución y pidió al Gobierno del Reino Unido que lo ratificase. El Consejo Consultivo, con arreglo a las propuestas, que habían sido convenidas casi a unanimidad por los habitantes del Territorio, quedaría substituido por un Consejo Legislativo, que comprendería cuatro nuevos miembros elegidos, con lo que el total de éstos ascendería a doce. El Consejo comprendería, además, seis miembros no oficiales designados y dos funcionarios designados. El Consejo sería el órgano legislativo; el Gobernador tendría ciertos poderes reservados que podría utilizar en circunstancias excepcionales. Podría, si fuere oportuno, constituir comités del Consejo, a los que delegaría ciertas

funciones y responsabilidades departamentales. Entre los miembros de esos comités habría expertos especiales, si fuese necesario, y una mayoría de miembros del Consejo Legislativo. El Consejo Ejecutivo se compondría de dos funcionarios y de los presidentes de los comités del Consejo Legislativo. La administración pública seguiría dependiendo del Gobernador, quien estimaba que con esta reforma la población del Territorio podría tomar una parte mucho más eficaz y responsable en la gestión de sus propios asuntos.

28. Ya el Territorio había avanzado hacia el sufragio universal de adultos, y se habían celebrado elecciones en 1963. Por consiguiente, el adelanto de los tres Territorios en las esferas política y constitucional era netamente favorable. Recordó que en cada caso los resultados se habían obtenido previa consulta de la población interesada, y con la participación de sus representantes, elegidos democráticamente.

29. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas opinó que las declaraciones del representante del Reino Unido sólo tenían por objeto crear confusión y permitir que el Gobierno de ese país eludiera la obligación de decir lo que pensaba hacer para aplicar las resoluciones de la Asamblea y del Comité Especial. El representante del Reino Unido se había referido detalladamente a la reforma constitucional, al establecimiento de un sistema electoral y de leyes adecuadas, etc., como si esas cuestiones fueran el centro mismo de la política del Reino Unido. Por su parte, la delegación de la URSS deseaba afirmar claramente que la cuestión de las disposiciones constitucionales sólo debían depender de la decisión del pueblo, y deseaba asimismo invitar al Reino Unido a que pusiera fin a todas las maniobras y a todos los obstáculos destinados a perpetuar la dominación colonial, pues había llegado el momento de conceder a los pueblos la independencia a la que tenían un derecho imprescriptible.

30. Añadió que el representante del Reino Unido había querido refutar las afirmaciones de la delegación de la Unión Soviética diciendo que no se había concertado ningún acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos sobre la financiación de la base de las islas García, pero se había guardado de decir que los trabajos de instalación de la base ya habían empezado. A ese respecto, convenía señalar que la delegación de la Unión Soviética no había inventado nada y que las informaciones que había mencionado en el Comité y en el Subcomité se basaban en artículos publicados por la prensa británica y norteamericana, que podían encontrarse fácilmente. En efecto, la prensa revelaba que los Estados Unidos presionaban a sus asociados para incitarlos a permanecer al este de Suez y cumplir sus obligaciones. Esas "obligaciones" consistían en seguir desempeñando su función policial en esa parte del mundo. Podía leerse en la prensa norteamericana, y también, desde luego, en la prensa británica, que se habían celebrado conversaciones entre los Estados Unidos y el Reino Unido y que se había llegado a un acuerdo para que los Estados Unidos asumieran la mayor parte de las responsabilidades de las bases situadas al este de Suez y se encargaran de la instalación de la base de las islas García. Era difícil imaginar por qué razón la prensa de las dos grandes Potencias occidentales iba a divulgar informaciones de esa índole si en realidad no se hubiese concertado ese acuerdo. Pero si el Reino Unido mantenía sus denegaciones, sería fácil demostrar la verdad enviando una misión de encuesta a las islas, como propusiera el representante de Siria. Sin embargo, la delegación de la URSS pensaba que en ese caso las informaciones estaban fundadas y todos los datos relativos a la base eran exactos.

31. Por lo que hacía a los primeros habitantes de la Isla Mauricio, o sea las drontas y las tortugas, la delegación del Reino Unido no había ilustrado en nada a los representantes de la Unión Soviética, quienes, por otra parte, ya habían contestado a sus observaciones. Mas, como la delegación del Reino Unido había abordado la cuestión de la ornitología, cabía señalar que además de las drontas, otros pájaros, de alas más grandes, surcaban el cielo de los territorios no autónomos y eran utilizados por los colonialistas para oprimir a los pueblos sometidos. No hacía mucho tiempo se había hablado de los de la isla de la Ascensión. Al parecer, el representante del Reino

Unido tenía instrucciones de repetir los falsos argumentos del año pasado, pero la verdad era que se podía decir mucho más de esas aves modernas, cuya especie no se había extinguido ni estaba en vías de extinción; a ese respecto, las actas resumidas de 1965 y de 1966 eran sumamente instructivas.

32. El representante de Malí dijo que, aun cuando el sistema electoral que la Potencia Administradora quería aplicar en la Isla Mauricio y que el representante del Reino Unido acababa de exponer era muy complejo — por su parte, no acertaba a comprenderlo con claridad —, celebraba que el informe de la Comisión Banwell hubiera sido aprobado por todos los partidos políticos y que las elecciones debían proporcionar al Territorio la posibilidad de lograr la independencia a partir del verano de 1967.

33. El representante de Siria recordó, como habían señalado los representantes de la URSS y de Malí, que la cuestión esencial consistía en saber cómo pensaba el Reino Unido aplicar la resolución 2069 (XX) de la Asamblea General.

34. La posibilidad de la instalación de bases militares por el Reino Unido y los Estados Unidos tanto más preocupaba a África y al Oriente Medio cuanto que no hacía mucho tiempo se habían lanzado, desde bases semejantes, agresiones que habían sido condenadas por las Naciones Unidas. Añadió que el representante de la Potencia Administradora había dicho que por el momento los dos países no habían llegado a un acuerdo; pero al orador le parecía que las negociaciones se habían iniciado. Preguntó si estaban representados los habitantes autóctonos en esas negociaciones y, de estarlo, por quién.

35. La evolución constitucional debía estar supeditada a la elección del pueblo. El representante de la Potencia Administradora había declarado que, una vez elegidos los representantes según el sistema electoral propuesto, esos representantes se pronunciarían sobre la cuestión de la independencia. El orador quería saber en qué momento la Asamblea Legislativa elegida se reuniría y adoptaría una decisión de esa naturaleza. Por otra parte, todavía no se veía claramente cómo el sistema electoral previsto permitiría resolver el problema de las divisiones étnicas.

36. A continuación recordó que, al iniciarse la sesión, había señalado las dificultades económicas que la Isla Mauricio padecía a causa de su mal clima y dijo que las viviendas allí no eran adecuadas para proteger a los habitantes de los elementos.

37. El representante de Túnez preguntó qué ventajas presentaba un sistema electoral tan complicado y extraño como el que se preveía para la Isla Mauricio y que acababa de describir el representante del Reino Unido. Dudaba que ese sistema pudiera facilitar realmente la unidad nacional, y juzgaba preferible organizar elecciones por el sufragio universal.

38. El representante del Reino Unido dijo que se había decidido reservar escaños especiales para determinadas minorías o comunidades pero que el nuevo sistema electoral se había concebido de modo que les asegurara una representación justa. El nuevo sistema era menos complicado de lo que podría parecer y, sobre todo, contaba con el acuerdo general de todos los partidos políticos de la Isla Mauricio. Al contestar a la pregunta del representante de Siria, recordó que había indicado en su informe que la Asamblea Legislativa se reuniría inmediatamente después de las elecciones, es decir hacia febrero de 1967; la Isla Mauricio podría entonces pedir la independencia, si la deseaba.

39. El representante de Siria preguntó si los ocho escaños que debían proveerse según el sistema de los "perdedores calificados" se atribuirían, de hecho, a los sectores chino y musulmán de la isla.

40. El representante de Túnez señaló que el Comité Especial ya había estudiado la cuestión de la Isla Mauricio, de las Islas Seychelles y Santa Elena, que también había sido objeto de las resoluciones 2066 (XX) y 2069 (XX) de la Asamblea General, en las cuales se reafirmó el derecho inalienable de los pueblos de los Territorios a la libertad y a la independencia y se invitó a la Potencia Administradora a adoptar medidas eficaces para dar cumplimiento inmediato y completo a la resolución 1514 (XV).

41. Recordando que el representante del Reino Unido había hecho en la sesión anterior una breve exposición de lo que sería el porvenir de esas islas, manifestó el orador su esperanza de que el sistema electoral previsto no acentuara las diferencias raciales, sino que, por el contrario, respetara los intereses de los diversos sectores de la población. Dicho esto, quedaba por resolver un grave problema económico y social. En efecto, la economía de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena, de tipo primario y colonial, se caracterizaba por un marcado estancamiento y por la imposibilidad de aumentar el empleo de la mano de obra y de equilibrar la balanza de pagos, ya que las importaciones superaban a las exportaciones. Tan poco satisfactoria era la situación, que el 13 de junio de 1966 se habían declarado en huelga 3.250 obreros en las Islas Seychelles y la Potencia Administradora había tenido que hacer intervenir a las tropas para acabar con la huelga.

42. Además, aunque en la resolución 2066 (XX) se invitó a la Potencia Administradora a no adoptar ninguna medida que pudiera desmembrar el Territorio de la Isla Mauricio y violar su integridad territorial, no se podía negar que la división ya era un hecho consumado. El 10 noviembre de 1965 el Secretario de Estado para las Colonias declaró que se habían adoptado nuevas disposiciones, con el asentimiento de los Gobiernos de la Isla Mauricio y de las Islas Seychelles, para la administración del archipiélago de Chagos y de las Islas Aldabra, Farquhar y Desroches. Esos Territorios estaban administrados por los Gobiernos de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, respectivamente, y llevaban, en la actualidad, el nombre de Territorio Británico del Océano Índico, y los Gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos podrían construir allí instalaciones defensivas. La Potencia Administradora había, pues, desmembrado la Isla Mauricio y las Islas Seychelles para instalar en ellas una base militar. A este respecto el orador señaló que su país había experimentado el mismo problema con la base de Bizerta y que el establecimiento de tales bases en países aún colonizados era condenable por todos los conceptos. En consecuencia, el Subcomité debía recomendar al Comité Especial que invitara a la Potencia Administradora a adoptar las medidas pertinentes para la aplicación de la resolución 1514 (XV), a conducir a los habitantes de esas islas hacia la independencia, a renunciar al plan de desmembrar la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, a renunciar también a la instalación de bases militares y a dar su autorización y su apoyo para el envío de misiones visitadoras de las Naciones Unidas a esos Territorios.

43. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que había interpretado la declaración del representante del Reino Unido en la sesión anterior en el sentido de que, como a la llegada de los franceses y los ingleses, la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena estaban desiertas, no pertenecían a nadie. El orador no deseaba entrar en detalles pero opinaba que, independientemente de su origen, los habitantes de esas islas estaban sometidos a un dominio colonial y esa situación les privaba del derecho de elegir su propia forma de gobierno. Eso, precisamente, era lo que condenaba el Gobierno de la República Unida de Tanzania. De hecho, en las declaraciones del representante del Reino Unido no había ningún elemento nuevo: su autor simplemente esquivó el problema principal, o sea, la obligación de permitir que los pueblos de esos Territorios ejercieran su derecho a la libre determinación. Sin embargo, no cabía duda de que esa obligación era una de las que imponían a la Potencia Administradora tanto la resolución 2066 (XX) relativa a la Isla Mauricio, como la resolución 2069 (XX), que interesa especialmente a las Islas Seychelles y Santa Elena. Por lo que hacía a estas últimas, en la resolución 2069 (XX) se pidió asimismo a las Potencias administradoras que permitieran a las misiones de las Naciones Unidas visitar los Territorios y les ofrecieran toda su cooperación y asistencia. Para el orador esto era perfectamente natural y la aplicación de estas resoluciones no plantearía ningún problema si la Potencia Administradora cumpliera sus obligaciones y respetara las decisiones adoptadas por la Asamblea General con arreglo a la Carta. Sin embargo, lo que de hecho había sucedido desde que se aprobaron estas resoluciones era que el archipiélago de Chagos había pasado a formar parte del nuevo Territorio Británico del Océano Índico. Señaló que esa decisión fue tomada casi un mes antes de la aprobación de la resolución 2066 (XX) de

la Asamblea General, en la que se invitó a la Potencia Administradora a no adoptar ninguna medida que pudiera desmembrar el Territorio de la Isla Mauricio y violar su integridad territorial. En esa situación resultaba, pues, muy improbable que la Isla Mauricio obtuviese la independencia en 1966, según se había previsto. En vez de aplicar las resoluciones de la Asamblea General, el Gobierno del Reino Unido había procurado aplazar las medidas importantes que debía haber adoptado, nombrando una comisión electoral que preparó una constitución que podía calificarse de científica. Por lo tanto, la intensa oposición con que tropezaba esta extraña constitución era perfectamente natural y, además, era poco probable que el Gobierno del Reino Unido hubiese esperado alguna vez que los habitantes de la Isla Mauricio la aceptaran. A este respecto, el supuesto acuerdo a que habían llegado el Subsecretario de Estado para las Colonias y los representantes de la oposición isleña no demostraba nada, pues no había ninguna garantía de que las conversaciones se hubiesen desarrollado con libertad. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido debía recordar que cada vez que había pretendido preparar la constitución de una de sus antiguas colonias sin tener en cuenta los intereses de la población, esas constituciones habían fracasado y habían sido sustituidas por instrumentos verdaderamente democráticos.

44. En cuanto al nuevo Territorio Británico del Océano Indico, la manera en que había sido constituido y la rapidez con que ello había ocurrido no podía sino suscitar ciertas sospechas. La delegación de Tanzania tenía motivos para pensar que el Territorio iba a convertirse en una base militar. Aparte de los peligros que representaban esas bases para los países vecinos en caso de guerra, no se debía olvidar el ejemplo de la Isla de la Ascensión, que sirviera de base a los mercenarios para atacar a los congoleños que combatían por su libertad. La labor del Comité Especial debía, pues, enderezarse a asegurar la integridad territorial de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena, y a conseguir una garantía de que no serían utilizadas con fines militares.

45. Añadió que la situación económica de los Territorios no era satisfactoria: tanto la agricultura como la industria, que en 1964 representaban el 24% y el 15%, respectivamente, del producto nacional bruto de la Isla Mauricio, habían experimentado una baja considerable, al tiempo que el desempleo aumentaba rápidamente. Si se deseaba evitar disturbios sociales, se debía abandonar el monocultivo en la Isla Mauricio y en las Islas Seychelles y Santa Elena. A este respecto convenía señalar que, si bien no hacía nada para evitar que el Gobierno de Rhodesia del Sur privara a cuatro millones de africanos del derecho a gobernar su propio país, el Gobierno del Reino Unido había considerado oportuno enviar dos buques de guerra a las Islas Seychelles para obligar a los huelguistas a regresar al trabajo.

46. Para terminar, declaró que esperaba que la razón prevalecería y que la Potencia Administradora permitiría al fin y al cabo que los pueblos de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena gobernarán sus países respectivos como juzgasen conveniente.

47. El representante de Yugoslavia recordó la resolución 2066 (XX), relativa a la Isla Mauricio, en la que la Asamblea General invitó especialmente a la Potencia Administradora a no adoptar ninguna medida que pudiera violar la integridad del territorio; la Asamblea también aprobó la resolución 2069 (XX) referente a varios territorios pequeños, entre los cuales figuraban las Islas Seychelles y Santa Elena. A pesar de lo dispuesto en esas resoluciones, parecía que la Potencia Administradora no sólo se había abstenido de adoptar las medidas pertinentes para dar la independencia a los Territorios, conforme a las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, sino que, además, había adoptado medidas incompatibles con dicha Declaración.

48. A juicio del orador, el desarrollo de esos Territorios seguía siendo muy lento por causa de los intereses que la Potencia Administradora deseaba conservar el mayor tiempo posible. Recordó que en 1964 la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de Países no Alineados, celebrada en El Cairo, había condenado la intención manifestada por las Potencias im-

perialistas de establecer bases militares en el Océano Indico, por juzgar que tales bases constituirían una amenaza para los nuevos países de África y de Asia y podrían retrasar el proceso de descolonización. Los acontecimientos habían dado la razón a la Conferencia, ya que en noviembre de 1965 el Reino Unido había decidido constituir el nuevo Territorio Británico del Océano Indico, para la instalación de bases defensivas del Reino Unido y los Estados Unidos. A pesar de la dimisión de tres ministros del Parti Mauricien Social Démocrate y de las protestas elevadas en esa isla contra tal decisión, la Potencia Administradora no había modificado su posición, según se desprendía de la declaración del Secretario de Defensa del Reino Unido, mencionada en el párrafo 34 del documento de trabajo de la Secretaría (véase cap. XIV, párr. 48).

49. Manifestó que la delegación yugoslava estimaba, como había dicho en otras ocasiones, que el Reino Unido no tenía derecho a desmembrar el Territorio de la Isla Mauricio para establecer instalaciones militares. Consideraba que el Subcomité tenía la obligación de formular para el Comité Especial recomendaciones que permitieran a los pueblos de estos Territorios alcanzar la independencia sin más demora, con arreglo a sus deseos libremente expresados y a las disposiciones de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV). También consideraba que el establecimiento de bases militares mediante el desmembramiento del Territorio de la Isla Mauricio debía estudiarse con especial atención, según se disponía en la resolución 2066 (XX) de la Asamblea.

50. El representante de Dinamarca celebró que el Territorio de la Isla Mauricio debiese lograr su independencia el año entrante en virtud del acuerdo concertado en la Conferencia Constituyente celebrada en Londres en septiembre de 1965. A raíz de las negociaciones celebradas entre la Potencia Administradora y los tres partidos políticos principales de la Isla, las disposiciones electorales previstas en el proyecto de constitución inicial, que habían suscitado críticas de esos partidos, habían sido modificadas y aprobadas por todos los interesados. A este respecto el orador deseaba señalar que, si bien el régimen electoral previsto para la Isla Mauricio parecía, a primera vista, demasiado complejo, en Dinamarca existía un sistema análogo y de igual complejidad, que funcionaba satisfactoriamente desde hacía muchos años; la experiencia había demostrado que ese régimen respondía perfectamente a su objetivo, o sea garantizar la representación equitativa de todos los electores. Las elecciones que se habían de celebrar en la Isla Mauricio asegurarían la constitución de un gobierno autónomo y después, al cabo de seis meses, la concesión de la independencia. La situación económica y social del Territorio parecía satisfactoria, gracias a los intensos esfuerzos realizados por las autoridades y la población para superar las graves dificultades debidas a las pérdidas ocasionadas hacía algunos años por dos huracanes. Además, desde hacía varios años las autoridades intentaban diversificar la economía de la Isla que, por el momento, dependía en gran medida de la producción azucarera. Por consiguiente, el Gobierno de Dinamarca opinaba que el Territorio de la Isla Mauricio podía marchar con toda confianza hacia la independencia y se proponía mantener excelentes relaciones con el nuevo Estado.

51. En cuanto a las Islas Seychelles y Santa Elena, la delegación de Dinamarca opinaba, según había indicado repetidas veces, que el porvenir constitucional de esos Territorios debía ser decidido exclusivamente por sus pueblos. La extensión, la población y la economía de esas islas podrían justificar la adopción de disposiciones constitucionales especiales que no se debían descartar, siempre que el pueblo les diese su aprobación.

52. A juicio del orador en el informe del Subcomité al Comité Especial se debiera consignar la satisfacción del primero por el notable progreso registrado en el Territorio de la Isla Mauricio en su avance hacia la independencia, y manifestar la esperanza de que las próximas elecciones demostrasen una vez más que el pueblo deseaba dicha independencia. En cuanto a los Territorios de las Islas Seychelles y Santa Elena, el Subcomité debía preparar sus recomendaciones habida cuenta de las especiales circunstancias que se daban en ellos, y evitar, por consiguiente, toda propuesta que fuese incompatible con esas circunstancias o con los deseos de los pueblos interesados.

B. Conclusiones

53. El estudio de la situación de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena demuestra que la Potencia Administradora no sólo no ha aplicado hasta la fecha las disposiciones de la resolución 1514 (XV) en estos Territorios, sino que también ha violado la integridad territorial de dos de ellos al crear un nuevo Territorio, el Territorio Británico del Océano Indico, compuesto de islas separadas de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, en directa contravención de la resolución 2066 (XX) de la Asamblea General.

54. El Subcomité toma nota con pesar de la lentitud de la evolución política en los Territorios, particularmente en las Islas Seychelles y Santa Elena. Esto ha demorado el traspaso de los poderes a representantes del pueblo elegidos democráticamente y el logro de la independencia. Parece que los puestos de mayor responsabilidad en la administración de los Territorios están todavía ocupados por personal del Reino Unido.

55. El Subcomité toma nota con profunda inquietud de los informes que señalan la existencia de un plan destinado, entre otras cosas, al establecimiento de bases militares en la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, así como de una base aérea en la Isla de la Ascensión, plan que suscita ansiedad en los Territorios interesados y entre los pueblos de África y Asia y contraviene las disposiciones de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General.

56. El mecanismo electoral dispuesto para la Isla Mauricio, aparte de ser complejo en sí, parece haber sido motivo de mucha controversia entre los diversos grupos y partidos políticos. Con respecto a las Islas Seychelles, el Subcomité deplora que el pueblo se halle aún privado del derecho al sufragio universal.

57. La economía de los Territorios, en particular de la Isla Mauricio, se caracteriza por un ingreso decreciente, un aumento del desempleo y, por ende, la declinación del nivel de vida. Las compañías extranjeras siguen explotando los Territorios sin tener en cuenta los verdaderos intereses de sus habitantes.

C. Recomendaciones

58. El Subcomité recomienda que el Comité Especial reafirme el derecho inalienable de los pueblos de la Isla Mauricio, las Islas Seychelles y Santa Elena a la libre determinación y a la independencia, conforme a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Por

lo tanto, debe exhortarse una vez más a la Potencia Administradora a que permita a los pueblos de los tres Territorios ejercer sin demora su derecho a la libre determinación.

59. Cualquier cambio constitucional debe dejarse al pueblo de los Territorios mismos, ya que el pueblo es el único que tiene derecho a decidir sobre la forma de gobierno que desea adoptar.

60. A la mayor brevedad posible deben efectuarse en los Territorios elecciones libres y basadas en el sufragio universal de adultos. Las elecciones deben conducir a la creación de órganos representativos que habrán de escoger los gobiernos responsables a los cuales se transferirán todos los poderes.

61. Debe pedirse a la Potencia Administradora que respete la integridad territorial de la Isla Mauricio y las Islas Seychelles, y que dé seguridades de que esos Territorios no serán utilizados para fines militares.

62. En cumplimiento de las disposiciones del párrafo 12 de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, debe pedirse a la Potencia Administradora que se abstenga de establecer bases militares en los Territorios.

63. El Comité Especial debe recomendar a la Asamblea General que declare categóricamente que ningún acuerdo bilateral que sea celebrado entre la Potencia Administradora y otras Potencias y afecte a la soberanía y los derechos fundamentales de los Territorios será reconocido como válido.

64. Debe pedirse a la Potencia Administradora que preserve el derecho de los habitantes autóctonos a disponer de toda la riqueza y todos los recursos naturales de sus países. Debe instársela a adoptar medidas efectivas para diversificar la economía de los Territorios.

D. Aprobación del informe

65. El presente informe fue aprobado por el Subcomité en su 32a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966. El representante de Dinamarca declaró que ciertas partes de las conclusiones y de las recomendaciones del informe no coincidían con la opinión expresada por su delegación en la sesión del Subcomité celebrada el 12 de septiembre de 1966 (véanse los párrs. 50 a 52 *supra*). Por lo tanto, la delegación de Dinamarca no podía apoyar todas las conclusiones y recomendaciones del informe.

CAPÍTULO XV*

ISLAS GILBERT Y ELLICE, ISLA PITCAIRN E ISLAS SALOMON

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. En noviembre de 1964, después de examinar las Islas Gilbert y Ellice, la Isla Pitcairn y las Islas Salomón, el Comité Especial recomendó, entre otras cosas, que la Potencia Administradora tomase medidas urgentes para la rápida aplicación de la declaración incluida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Consideró que las poblaciones de esos Territorios debían tener la posibilidad de manifestar sus deseos de conformidad con las disposiciones de esa resolución, mediante la aplicación de firmes procedimientos democráticos basados en el principio del sufragio universal de adultos. Estimó que la Potencia Administradora debía introducir medidas que acelerasen el progreso social y económico de los Territorios. Estimó asimismo que el envío de una misión visitadora sería útil para apreciar

el ambiente político de los Territorios y los deseos de sus pueblos y que habría que adoptar las medidas necesarias para realizar esa visita en consulta con la Potencia Administradora (A/5800/Rev.1¹, cap. XX, párrs. 92 a 96).

2. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General, después de estudiar los capítulos de los informes del Comité Especial concernientes a esos Territorios (A/5800/Rev.1, cap. XX; y A/6000/Rev.1², cap. XIX), aprobó la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965, por la cual hacía suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuraban y pedía a la Potencia Administradora que pusiese en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Pedía a la Potencia Administradora que permitiese a las misiones de las Naciones Unidas visitar los

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

Territorios y que les ofreciese toda su cooperación y asistencia. Finalmente, pedía al Comité Especial que examinase la situación de esos Territorios e informase a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, sobre la aplicación de la resolución.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS

Introducción

3. La información sobre las Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón está contenida en los informes dirigidos por el Comité Especial a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo (*ibid*). A continuación se da información suplementaria sobre acontecimientos recientes³.

1. Islas Gilbert y Ellice

Generalidades

4. Según el censo levantado el 30 de abril de 1963, la población era de 49.879 habitantes. A fines de 1964 se estimaba que la población ascendía a más de 50.000 habitantes.

Acontecimientos políticos y constitucionales

5. El Territorio no tiene Consejo Legislativo. Tiene un Consejo Asesor, presidido por el Comisionado Residente y compuesto por once miembros no funcionarios y cinco miembros funcionarios nombrados por el Comisionado. Este debe informar o consultar al Consejo sobre las cuestiones que a tal efecto determine el Alto Comisionado del Pacífico Occidental. El Consejo puede solicitar información o prestar asesoramiento sobre cualquier cuestión que afecte al Territorio, pero el Comisionado Residente no está obligado a proporcionar esa información o aceptar ese asesoramiento.

6. En octubre de 1965 se formó en el Territorio el primer partido político, el Gilbertese National Party (GNP). Según se informa, su objetivo es, entre otras cosas, acelerar el ritmo actual de la evolución constitucional, para llegar a una forma de gobierno más representativa y democrática. Se informa que, ordinariamente, el ingreso al partido está limitado a los autóctonos. Sin embargo, pueden hacerse excepciones a esta regla en favor de personas que no sean gilbertianas o que lo sean a medias y que hayan pasado gran parte de sus vidas en las Islas Gilbert. Alrededor del 85% de los habitantes del Territorio son autóctonos y el 15% restante procede de las Islas Ellice. En noviembre de 1965 se formó en Larama un segundo partido político, el Christian Democratic Party (CDP). Para ingresar al partido, que incluye a autóctonos, nativos de las Islas Ellice y mestizos, no se tienen en cuenta la religión ni la raza. Se informa que sus propósitos son asegurar una mayor participación en los asuntos del Territorio; promover el bienestar y la armonía entre el pueblo del Territorio; aumentar la producción de copra; mejorar la educación, y examinar el régimen agrario para asegurar los derechos individuales y aumentar la producción.

³La información presentada ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 7 y 14 de junio y el 2 de septiembre de 1965, correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 1964.

Situación económica

7. En 1964 no se produjeron cambios importantes en la situación económica general del Territorio. La economía del mismo se basa en la extracción de fosfato en la Isla Océano y la producción de copra en las otras islas.

8. En 1964 las exportaciones e importaciones se evaluaron en 1.201.296 y 1.623.863 libras australianas respectivamente, en comparación con 1.276.122 y 1.416.092 libras australianas el año anterior. El 99% del valor de todas las exportaciones corresponde al fosfato y la copra. Las principales importaciones son productos alimenticios y artículos manufacturados.

9. Durante el año 1964 los ingresos ordinarios sumaron 814.338 libras australianas, o sea un aumento de 58.689 libras australianas con respecto al año anterior. La principal fuente de ingresos es el impuesto a los fosfatos, que los Comisionados Británicos del Fosfato pagan con respecto a todo este producto exportado de la Isla Océano, y los derechos de aduana. Los gastos, excluidos los subsidios, sumaron 867.520 libras australianas, lo que representa un aumento de 60.798 libras australianas con respecto al año anterior. Se gastaron otras 95.960 libras australianas en planes del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial.

Situación social

10. En 1964 no se produjeron cambios importantes en lo que respecta a la mano de obra, las condiciones de empleo y la cantidad de personas empleadas. Los gastos de sanidad totalizaron 82.740 libras australianas, o sea un 10% de los gastos totales.

Situación de la enseñanza

11. En 1964 no se produjeron cambios importantes en la situación de la enseñanza. Había 11.659 alumnos en las escuelas primarias; la mayoría de ellos concurrían a escuelas misionales. Había cuatro escuelas secundarias con 326 alumnos, y tres escuelas normales con 86 estudiantes de magisterio. Dieciséis estudiantes becados cursaban estudios secundarios en Australia y Nueva Zelanda, y uno concurría a una universidad. Otros 38 estaban en el extranjero siguiendo cursos de formación profesional y técnica. Los gastos de educación, incluyendo subsidios correspondientes a los planes del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial, equivalieron a aproximadamente el 10% del presupuesto total del Territorio.

2. Isla Pitcairn

Generalidades

12. La población de la Isla Pitcairn era de 79 habitantes en 1964. El Gobernador de las Islas Viti es Gobernador *ex officio* de Pitcairn y dicta leyes para este Territorio. Los asuntos de la Isla son administrados por un Consejo Insular, integrado por tres habitantes locales elegidos sobre la base del sufragio universal de adultos. No se dispone de información sobre acontecimientos políticos correspondientes al año 1964.

Situación económica

13. No se dispone de información sobre el valor de las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones consisten en frutas y artículos de artesanía que se ven-

den principalmente a los buques que hacen escala. Las importaciones consisten principalmente en alimentos, combustibles y artículos de vestir. Los ingresos de 1964-1965 fueron en total de 41.934 libras esterlinas, de las cuales 32.000 procedían de la venta de sellos de correo o filatelistas y 7.684 libras representaban un subsidio de los Fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial. Los gastos en el mismo período se elevaron a 34.904 libras.

3. Islas Salomón

Generalidades

14. Se estimó que a fines de 1964 la población del Territorio era de 136.750 habitantes, de los cuales 128.200 eran melanesios, 6.900 polinesios y micronesios y 1.660 de otras razas. En los últimos años, inmigrantes procedentes de las Islas Gilbert y Ellice, donde hay exceso de población, se han asentado en las zonas menos pobladas del Territorio.

Gobierno

15. El Consejo Legislativo de las Islas Salomón se compone de once miembros funcionarios y diez miembros no funcionarios. Ocho de estos últimos son elegidos, siete por colegios electorales compuestos de miembros electos de las autoridades locales y uno directamente por sufragio universal de adultos. Los otros trece miembros son nombrados por el Alto Comisionado.

16. En virtud de la nueva *Local Government Ordinance*, que entró en vigor en 1963, para fines de 1964 se habían establecido 17 consejos locales, cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal de adultos. Hasta entonces, el Alto Comisionado nombraba los miembros de los consejos locales.

Partidos políticos

17. En junio de 1965 los ocho miembros electos del Consejo Legislativo de las Islas Salomón anunciaron que habían formado un partido político que se conocería con el nombre de Democratic Party of the British Solomon Islands. Los principales objetivos del partido serían la libre determinación para el Territorio dentro del Commonwealth; educación para todos; mejores relaciones industriales y un mejor sistema para el arreglo de las controversias; unificación de todos los pueblos de las Islas Salomón y una mayor participación de las mujeres en los asuntos del Territorio.

Situación económica

18. En el momento actual la economía del Territorio se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y en la producción de copra para la exportación. Sin embargo, se está fomentando rápidamente el cultivo del cacao como segunda cosecha comercial, y en 1964 también se cultivaron experimentalmente el arroz, la soja y la palma aceitera, con la esperanza de llegar, para 1966, al cultivo mecanizado en gran escala del arroz y la soja. También se ha comenzado a aserrar madera en gran escala y se espera que las exportaciones de madera alcancen los 10 millones de pies cúbicos en los próximos años, o sea más del décuplo de la cantidad exportada en 1964. No existe minería en gran escala, pero se extraen pequeñas cantidades de oro. Hay pequeñas industrias que satisfacen algunas necesidades locales.

19. Las cosechas comerciales se limitan casi enteramente a la zona costera, los valles de los ríos y las

colinas de las islas más grandes. Las cosechas alimenticias provienen generalmente de cultivos migratorios, principalmente en zonas forestales. Prácticamente no existen tierras de cultivos permanentes o mixtos debido principalmente a la densidad con que crece la selva en las zonas donde no se planta el coco o el cacao.

20. El valor de las exportaciones en 1964 fue de 1.990.000 libras australianas, contra 1.820.000 libras australianas en 1963. La copra representó el 88% y la madera el 8% de todas las exportaciones. Las importaciones se estimaron en 2.730.000 libras australianas, contra 2.310.000 libras australianas en 1963. El Reino Unido, el Japón y Australia recibieron el 98% de todas las exportaciones; el 70% de las importaciones procedía de Australia y del Reino Unido.

21. Los ingresos, incluidos los subsidios y las transferencias de fondos especiales, totalizaron 2.740.000 libras australianas, contra 2.350.000 libras australianas en 1963. Los gastos totales se elevaron a 2.610.000 libras australianas, contra 2.230.000 libras australianas en 1963.

22. Se elaboró un tercer plan de desarrollo para el período comprendido entre el 1º de enero de 1963 y el 31 de marzo de 1966. Los gastos totales de desarrollo que se podrían realizar para financiar los proyectos durante este período, utilizando fondos procedentes de todas las fuentes, se elevaban a 3.015.800 libras australianas. Durante el período 1962-1964 el Consejo Legislativo aprobó diversos documentos en los que se establecían políticas en materia de educación, medicina y sanidad, y agricultura y pesquerías, encaminadas a dar directrices para las diversas esferas del desarrollo. Además de aumentar la producción e introducir nuevas cosechas, se prestaba atención especial a un estudio geológico y al desarrollo de los bosques, las pesquerías y las cooperativas.

23. En 1965 la Potencia Administradora y el Fondo Especial de las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para realizar un estudio mineralógico de todo el Territorio, con la finalidad de fomentar los esfuerzos por diversificar su economía. El proyecto debe durar tres años y medio, a un costo de 1.565.100 dólares de los Estados Unidos, proporcionados por el Fondo y por el Gobierno del Territorio. Como la densa selva que cubre el Territorio hace difícil la identificación de minerales por métodos convencionales, se utilizarán reconocimientos aéreos y otras nuevas técnicas, entre ellas la interpretación fotogeológica. El estudio se realizará en cuatro fases. Se harán estudios geofísicos aéreos por métodos magnéticos, electromagnéticos y radiométricos. A continuación se harán estudios fotogeológicos, seguidos de estudios sobre el terreno empleando técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas. Finalmente, se harán perforaciones en zonas seleccionadas para completar los datos obtenidos en las etapas previas del estudio.

24. Algunos estudios limitados hechos en el pasado indican que la explotación de minerales puede ejercer influencia importante sobre el porvenir económico general del Territorio, y el presente proyecto está encaminado a proporcionar más información concreta.

Situación social

Mano de obra

25. La mano de obra total en el Territorio en 1964 se estimaba en 9.000 trabajadores, de los cuales unos

dos tercios eran trabajadores no calificados. La mayoría de los trabajadores se dedicaban a labores agrícolas o estaban empleados por el Gobierno. Había dos sindicatos registrados que en 1964 contaban con 4.850 miembros en total, lo que representaba un aumento del 10% con relación al año anterior.

Sanidad

26. No se han producido cambios de importancia durante el año 1964 en el personal y la organización de los servicios médicos gubernamentales y de los que sostienen las misiones religiosas. Los gastos médicos gubernamentales, incluidos los subsidios a las misiones, se elevaron a 255.872 libras australianas en 1964, contra 214.686 libras australianas en el año anterior, y representaron el 9% de todos los gastos de gobierno.

27. El paludismo y la tuberculosis son los dos principales problemas sanitarios del Territorio. En el momento actual, la concentración de recursos y la atención en la erradicación del paludismo impide que se ataque a fondo la tuberculosis. El éxito del proyecto experimental de erradicación del paludismo que se ha puesto en práctica bajo la dirección y con la activa asistencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha constituido la realización más notable en materia de sanidad de los últimos dos años. En colaboración con la OMS, el Gobierno proyectó llevar a la práctica en 1965 un programa de preerradicación, y se aprobó para este fin una asignación importante de fondos.

Situación de la enseñanza

28. La enseñanza está en su mayor parte en manos de las misiones religiosas. El Gobierno sostiene cinco escuelas primarias, una secundaria y una escuela normal. Presta asistencia a las iglesias y a los consejos locales para que proporcionen enseñanza primaria. En 1964 existían 402 escuelas primarias reconocidas y otras 90 escuelas exentas de la obligación de inscribirse por un periodo de dos años. La matrícula total de estas escuelas era de 20.846 alumnos. Las cinco escuelas secundarias tenían 240 alumnos y las dos escuelas normales 56 estudiantes.

29. Tanto el Gobierno como las iglesias proporcionan becas para estudios secundarios y superiores en el extranjero; a veces se dispone de becas concedidas por otros países. A fines de 1964, diecinueve estudiantes disfrutaban de becas del Gobierno para hacer estudios secundarios en el extranjero y 111 estudiantes tenían becas concedidas por instituciones religiosas.

30. En 1964 los gastos recurrentes y los gastos de capital en educación se elevaron a 131.861 libras australianas y a 89.637 libras australianas, frente a 105.270 libras australianas, y 18.796 libras australianas en 1963. Los gastos recurrentes totales del Departamento de Educación han representado aproximadamente el 3,8% de todos los gastos recurrentes en los años 1962-1964. Los gastos de las iglesias y autoridades locales en 1964 se elevaron a 210.406 libras australianas.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

31. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité II sobre las Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón, que figura como anexo al presente capítulo.

32. El representante del Reino Unido hizo constar las reservas de su delegación respecto al informe. Recordó que su delegación había dejado en claro su posición durante las reuniones del Subcomité II, y señaló a la atención de los miembros del Comité Especial las actas resumidas de aquellas sesiones. Añadió que su delegación lamentaba que las conclusiones y recomendaciones relativas a esos Territorios no reflejaran adecuadamente los adelantos logrados en ellos, ni tuvieran en cuenta debidamente las circunstancias especiales que se daban en los Territorios.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ II

33. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó las conclusiones y recomendaciones del Subcomité II acerca de las Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón que se reproducen a continuación.

Conclusiones

34. a) El Comité Especial estima que, si bien la Potencia Administradora ha introducido, o piensa introducir, algunos cambios constitucionales en estos territorios, la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, no ha avanzado lo suficiente y debe acelerarse; b) Opina que las instituciones políticas y el aparato administrativo no son todavía plenamente representativos de la población de esos territorios. Las recomendaciones de 1964 del Comité Especial y la resolución 2069 (XX) de la Asamblea General no se han aplicado debidamente; c) Estima que es preciso fortalecer la base económica de los territorios; d) Comprende los problemas peculiares que plantean estas islas pequeñas y aisladas.

Recomendaciones

35. El Comité Especial reitera a la Potencia Administradora las recomendaciones que le hizo respecto de estos Territorios en 1964. Opina que es necesaria y sería muy útil una visita del Subcomité II para apreciar el ambiente político, las necesidades económicas y otras aspiraciones de esos pueblos. Pueden tomarse las medidas oportunas para concertar tal visita en consulta con la Potencia Administradora.

ANEXO

[A/AC.109/L.318/Add.1]

Informe del Subcomité II

ISLAS GILBERT Y ELICE, ISLA PITCAIRN E ISLAS SALOMÓN

Examen de la cuestión por el Subcomité

1. El Subcomité examinó la cuestión de las Islas Gilbert y Ellice, la Isla Pitcairn y las Islas Salomón en sus sesiones 44a., 46a., 47a., 49a. y 53a. celebradas el 12 de mayo y el 2, el 8, el 12 y el 29 de agosto de 1966.

2. El Subcomité tuvo ante sí el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véase los párrs. 1 a 30 del capítulo XV).

3. De conformidad con el procedimiento acordado por el Comité Especial, el Presidente invitó al representante del Reino Unido a que participara en las deliberaciones relativas a los tres Territorios.

4. En su declaración ante el Subcomité, el representante del Reino Unido señaló que a fines de 1964 se habían transmitido al Subcomité informaciones detalladas sobre las Islas Salomón, las Islas Gilbert y Ellice y la Isla Pitcairn, y que tanto en los documentos de trabajo de la Secretaría incluidos en el informe del Comité a la Asamblea General en 1965 como en los últimos documentos publicados, se resumían los principales acontecimientos ocurridos en dichos Territorios en el curso de los últimos meses.

5. En cuanto a las Islas Salomón, el actual Consejo Legislativo debía ser disuelto en abril de 1967 y, como había informado la delegación británica al Comité Especial el 16 de marzo de 1966, en el curso de 1966 se examinarían propuestas relativas a la evolución constitucional. En junio de 1965 el Secretario principal interino había señalado que en la próxima etapa de la evolución constitucional serían probablemente elegidos todos los miembros que formaban parte de la oposición, y que el sistema de colegio electoral se aplicaba sólo con carácter provisional, pues no podían organizarse simultáneamente elecciones directas en todos los distritos. Las próximas elecciones generales se realizarían probablemente mediante sufragio universal directo de los adultos en todas las circunscripciones, y habría entonces en el Consejo una mayoría electa. El primer partido político del Territorio, el Solomon Islands Democratic Party, se había constituido en junio de 1965 y formaban parte de él todos los miembros electos del Consejo Legislativo. Se estaba por hacer públicas nuevas propuestas constitucionales en el Territorio y cuando éstas se conociesen su delegación informaría al Subcomité acerca de las mismas.

6. De este modo, en las Islas Salomón, desde 1965 ocho de los diez miembros no funcionarios del Consejo Legislativo eran elegidos y cada uno de ellos representaba una circunscripción; en siete de las circunscripciones eran designados por un colegio electoral compuesto de representantes elegidos por las diversas autoridades locales de la circunscripción, las cuales eran a su vez elegidas por sufragio universal de los adultos. En la circunscripción de Honiara, la capital, las elecciones se efectuaban por votación directa. Esas nuevas propuestas sólo constituían, sin embargo, una etapa hacia el objetivo final, que era el establecimiento de un órgano legislativo totalmente elegido. Por lo demás, desde 1963 todos los miembros de los concejos municipales eran elegidos por sufragio universal de los adultos. En los demás Territorios se habían hecho progresos análogos; conforme a las disposiciones de la Constitución de 1965 de las Islas Gilbert y Ellice, el Consejo Ejecutivo de ese Territorio estaba compuesto por cuatro miembros no funcionarios y el Consejo Consultivo por once (o sea la mayoría).

7. En las Islas Gilbert y Ellice se estaba estudiando la posibilidad de pasar a la próxima etapa de la evolución constitucional; a fines de 1964 el Comisionado Residente había declarado al Consejo Consultivo que tanto el Consejo Consultivo como el Consejo Ejecutivo, creados hacía algunos meses, desempeñaban una función muy útil. No era aún más que un comienzo, pero había quien estimaba ya que el ritmo del progreso constitucional era demasiado rápido; el Comisionado había asegurado al Consejo que el Gobierno británico no trataría en ningún caso de acelerar la evolución, si no era ése el deseo de la población; sin embargo, todos debían comprender lo acertado de mantenerse a la delantera de la opinión pública. El Consejo Consultivo había apoyado las propuestas encaminadas a reorganizar la administración local, particularmente importante en el caso de esas Islas, que distaban bastante las unas de las otras. Se habían hecho progresos en el campo de la enseñanza, y el Reino Unido había prometido seguir proporcionando asistencia financiera para asegurar el desarrollo económico. Como había declarado el representante del Reino Unido al Comité Especial el 16 de marzo, en el curso del presente año se examinarían probablemente en el Territorio algunas propuestas encaminadas a modificar el sistema de representación en vigor. En la actualidad, cinco de los ocho miembros del Consejo Ejecutivo y once de los dieciséis miembros del Consejo Consultivo eran autóctonos de las Islas Salomón.

8. La Isla Pitcairn tenía ochenta y ocho habitantes. Su Consejo, cuya composición se había modificado a raíz de las elecciones de diciembre de 1964, estaba compuesto por el *Magistrate*

de la Isla, elegido por tres años, tres miembros elegidos cada año, el secretario de la Isla, que era miembro por derecho propio, un miembro nombrado por el Gobernador (que era también Gobernador de las Islas Viti), dos miembros designados por los miembros electos y dos miembros consultores que no tenían derecho a voto y eran elegidos el uno por el Gobernador y el otro por el resto del Consejo. El Comisionado encargado de la administración de la Isla Pitcairn había visitado la Isla en marzo de 1965 y sostenido conversaciones con los habitantes. Había recomendado mayor participación de las mujeres en los asuntos públicos, el mejoramiento de la agricultura, la modernización del régimen de la tierra y la introducción de un sistema de cooperativas agrícolas; había recomendado asimismo que se establecieran un programa de construcción de viviendas, un servicio local de radiodifusión y un programa de becas en las Islas Viti y que se revisara la estructura de salarios. No le había parecido justificada la evacuación de la Isla Pitcairn. Esas recomendaciones habían sido aceptadas, pero se necesitaría probablemente cierto tiempo antes que se aplicasen en su totalidad.

9. En una declaración posterior ante el Subcomité, dijo que se habían publicado propuestas para nuevos progresos constitucionales en las Islas Salomón que se habían de presentar al Consejo Legislativo en diciembre de 1966 y que las principales propuestas tendrían por objeto aumentar de 8 a 14 el número de miembros elegidos y, en la medida en que fuese administrativamente posible, disponer que los catorce miembros fuesen elegidos directamente en sus respectivas circunscripciones. Pero en algunas circunscripciones remotas, esparcidas en una vasta extensión de mar, sería imposible organizar elecciones directas, por lo menos en la actualidad. El Libro Blanco contenía asimismo propuestas para ampliar el Consejo Legislativo, para definir los poderes legislativos y de otra índole del Alto Comisionado y para establecer una Comisión de Administración Pública. Esas propuestas mostraban que se hacían progresos muy rápidos hacia el gobierno propio mediante amplias consultas con los dirigentes y el pueblo de las Islas Salomón.

10. El Gobierno de las Islas Gilbert y Ellice había publicado recientemente propuestas análogas encaminadas a lograr progresos constitucionales. Se proponía reemplazar el actual Consejo Consultivo por una Cámara de Representantes compuesta de siete miembros oficiales designados y veintitrés miembros elegidos mediante el sufragio de los adultos de todo el Territorio. El actual Consejo Ejecutivo sería reemplazado por un Consejo de Gobierno que ejercería a la vez el poder ejecutivo y el poder legislativo. El Consejo tendría cinco miembros oficiales y cinco miembros elegidos por la Cámara de Representantes, que asesoraría a ésta respecto de las decisiones de política importantes y de la legislación propuesta. Ambos órganos estarían presididos por el Comisionado Residente, quien debería consultar al Consejo acerca de virtualmente todos los asuntos legislativos y de política.

11. En ambos Territorios se había dado a las nuevas propuestas constitucionales amplia publicidad por intermedio de los servicios de prensa y de radio y había un interés general en la evolución constitucional y en las actividades de las Naciones Unidas, aun cuando se asociaba primordialmente a la Organización con las actividades de asistencia técnica, de las cuales se beneficiaban los isleños. La población de los Territorios no tenía ninguna razón para temer que el progreso hacia el gobierno propio significase el retiro de la asistencia del Reino Unido: en el plan de desarrollo correspondiente a 1965-1968 para las Islas Salomón se preveían gastos por valor de 5 millones de libras esterlinas en comparación con 1.200.000 libras asignadas con cargo a los fondos de desarrollo y bienestar colonial para 1963-1966; igualmente en el plan de desarrollo correspondiente a 1965-1968 para las Islas Gilbert y Ellice se preveían gastos por valor de 1.100.000 libras en comparación con 300.000 libras para 1963-1966.

12. El representante de Chile dijo que los problemas que afectaban a las islas eran característicos de todos los territorios del Pacífico. Estaban esparcidos sobre una vasta región del mar, con malas comunicaciones, tenían una reducida población y pocos recursos naturales; por lo tanto, no era de extrañar que su progreso económico, social y político fuese

extremadamente difícil y que el sentimiento de cohesión nacional hubiera tardado en desarrollarse. En tales circunstancias, su delegación estimaba que las nuevas propuestas constitucionales para las Islas Salomón y el establecimiento del primer partido político en este Territorio representaban un progreso apreciable hacia el gobierno propio.

13. Las propuestas encaminadas a establecer una cámara de representantes preponderantemente electiva en las Islas Gilbert y Ellice y a crear un órgano más representativo que reemplazase al Consejo Ejecutivo eran también alentadoras. Sin embargo, este cuadro de progreso podía significar poco si el Comisionado Residente retenía un poder ilimitado de veto o si las decisiones importantes eran sustraídas de la esfera de acción de la Cámara de Representantes.

14. Las extremas condiciones de lejanía, la reducida población de la Isla Pitcairn, y su virtual carencia de recursos naturales, imponían a la Potencia Administradora la responsabilidad especial de velar por el progreso social de sus habitantes y de asegurarles lo antes posible el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

15. Su delegación estimaba que, pese a los importantes progresos alcanzados, mucho quedaba aún por hacer para mejorar la situación económica y social de los Territorios y para preparar a sus habitantes para la libre determinación y la independencia. Por lo tanto, era muy importante que se diese al Subcomité una información más completa y detallada en lo referente a las condiciones económicas y sociales de la población y a sus opiniones en cuanto a su futuro político.

16. El representante de Polonia dijo que, si bien la posición geográfica y la estructura económica de los Territorios que se examinaban hacían que el progreso fuese muy difícil, su delegación estimaba que durante su larga administración el Reino Unido había hecho poco por prepararlos para el pleno desarrollo constitucional. Sin embargo, se habían formulado recientemente nuevas propuestas para el adelanto constitucional en las Islas Salomón y el aumento de los miembros elegidos del Consejo Legislativo era un indicio de progreso, aun cuando distaba mucho del cumplimiento cabal de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Sin una economía sana, el Territorio no podría lograr la verdadera libertad política, y su delegación encarecía a la Potencia Administradora que acelerase el fomento de su agricultura y el aprovechamiento de sus recursos minerales.

17. En las Islas Gilbert y Ellice, cuya economía se basaba en la exportación de copra y fosfatos, se requería una acción análoga. La economía de las Islas sólo se desarrollaría satisfactoriamente cuando los habitantes ejerciesen pleno control sobre sus recursos naturales y recibiesen de la Potencia Administradora más ayuda financiera.

18. En conclusión, el representante de Polonia deseaba reafirmar la convicción de su delegación de que no debía excluirse a los habitantes de las Islas Gilbert y Ellice, de la Isla Pitcairn y de las Islas Salomón del privilegio universal del gobierno propio y la independencia.

19. El representante de la India observó que aunque últimamente se habían registrado en los territorios algunos progresos alentadores en materia constitucional, podría haberse hecho mucho más para ayudar a sus habitantes a prepararse para el ejercicio de su derecho a la libre determinación. La propuesta Cámara de Representantes en las Islas Gilbert y Ellice, por ejemplo, no tendría plenos poderes legislativos y, sin órganos elegidos popularmente con plena autoridad para hablar en nombre del pueblo, no parecía haber justificación para que la Potencia Administradora tuviera la impresión de que los isleños estimaban demasiado rápido el ritmo del progreso constitucional. La dependencia del Territorio de un solo recurso económico — los fosfatos — era motivo de preocupación y la Potencia Administradora no debería escatimar esfuerzos por desarrollar otras fuentes de ingreso para las islas.

20. Aunque las propuestas tendientes a aumentar el número de miembros elegidos del Consejo Legislativo de las Islas Salomón eran halagadoras, la composición y los poderes de ese órgano no eran enteramente satisfactorias todavía. El alcance

y el efecto de las modificaciones, a decir verdad, distaban mucho de las disposiciones de la Declaración. Era comprensible que los isleños de los tres Territorios asociasen principalmente a las Naciones Unidas con las actividades de asistencia técnica en las cuales estaban ellos incluidos, pero la Potencia Administradora debía poner todo su empeño en asegurarse de que estuviesen informados debidamente de su derecho a determinar libremente su porvenir. Las misiones visitadoras de las Naciones Unidas serían de gran ayuda a este respecto y era de esperar que la Potencia Administradora cooperase con las Naciones Unidas en la realización del proceso de descolonización con la mayor rapidez y eficacia posibles.

21. El representante de Sierra Leona observó que, si bien los niveles de educación y las condiciones económicas y sociales así como la evolución constitucional variaban considerablemente en las pequeñas islas que se examinaban, todas ellas compartían el deseo supremo de lograr la libre determinación y la independencia. La tarea del Comité Especial era asegurar que todas tuviesen libertad para elegir la forma de independencia que desearan.

22. Puesto que el bienestar económico de las Islas Gilbert y Ellice dependía casi exclusivamente de los ingresos procedentes de la extracción de fosfatos, la Potencia Administradora debería estudiar la manera de diversificar la economía. También debería tratar de mejorar las condiciones de trabajo, de aumentar los servicios sociales y sanitarios y de adaptar el sistema de educación a las necesidades de un desarrollo acelerado. Finalmente, debería fortalecerse la autoridad del Consejo Asesor nombrado por el Comisionado Residente y darse un nuevo impulso a la evolución constitucional del Territorio. En las Islas Salomón deberían tomarse medidas semejantes a fin de diversificar la economía, mejorar las condiciones económicas, sociales y de educación y acelerar la evolución constitucional.

23. El Reino Unido, que tenía gran experiencia en materia de gobierno colonial y se mostraba dispuesto, en general, a cooperar con el Comité Especial, debería haber hecho mucho más en pro del bienestar material y el desarrollo político de las islas. El orador esperaba que dicho país intensificase sus esfuerzos a fin de que los habitantes tuviesen conciencia de su derecho al gobierno propio y a la independencia, y de las posibilidades que se les presentaban para obtener estos objetivos. Tal como se recomendaba en muchas resoluciones de la Asamblea General, la más reciente de las cuales era la resolución 2069 (XX), debía permitirse a los habitantes de las islas elegir el futuro político que desearan, sin coacción alguna.

Conclusiones del Subcomité

24. a) El Subcomité estima que, si bien la Potencia Administradora ha introducido, o piensa introducir, algunos cambios constitucionales en estos territorios, la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, no ha avanzado lo suficiente y debe acelerarse; b) El Subcomité opina que las instituciones políticas y el aparato administrativo no son todavía plenamente representativos de la población de esos territorios. Las recomendaciones de 1964 del Comité Especial y la resolución 2069 (XX) de la Asamblea General no se han aplicado debidamente; c) El Subcomité estima que es preciso fortalecer la base económica de los territorios; d) El Subcomité comprende los problemas peculiares que plantean estas islas pequeñas y aisladas.

Recomendaciones del Subcomité

25. El Subcomité recomienda al Comité Especial que reitere a la Potencia Administradora las recomendaciones que le hizo respecto de esos Territorios en 1964. El Comité cree que es necesaria y sería muy útil una visita del Subcomité para apreciar el ambiente político, las necesidades económicas y otras aspiraciones de esos pueblos. Pueden tomarse las medidas oportunas para concertar tal visita en consulta con la Potencia Administradora.

CAPÍTULO XVI*

NIUE E ISLAS TOKELAU

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. En 1964 el Comité Especial examinó a Niue y a las Islas Tokelau junto con las Islas Cook. El Comité opinó que las cuestiones de tamaño, aislamiento y recursos limitados no debían retrasar en modo alguno la aplicación de esos Territorios de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Entre otras cosas, recomendó que se permitiera a su población expresar sus deseos de conformidad con las disposiciones de la resolución, mediante procedimientos democráticos bien establecidos, bajo la supervisión de las Naciones Unidas; que la Potencia Administradora debiera considerar la naturaleza de la asistencia que podrían prestar las Naciones Unidas y ponerlo en conocimiento de la población; que la Potencia Administradora ampliara más las actividades de formación profesional del personal administrativo autóctono; y, además, se tomaran más medidas inmediatas para desarrollar y reforzar la estructura económica de estos Territorios (A/5800/Rev.1¹, cap. XV, párrs. 111 a 115).

2. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial relacionados con los Territorios de Niue y las Islas Tokelau (A/5800/Rev.1, cap. XV; y A/6000/Rev.1², cap. XIV) aprobó la resolución 2069 (XX) de 19 de diciembre de 1965, haciendo suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuraban y pidiendo encarecidamente a la Potencia Administradora que pusiera en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Pidió a la Potencia Administradora que permitiera a las misiones de las Naciones Unidas visitar los Territorios y les ofreciera toda su cooperación y asistencia. Por último, pidió al Comité Especial que examinara la situación de esos Territorios e informara a la Asamblea en el vigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de la resolución.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS

3. La información sobre Niue y las Islas Tokelau está contenida en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (*ibid.*). Se agrega información suplementaria *infra*³.

1. Niue

Generalidades

4. Al 31 de marzo de 1965 se calculaba la población de Niue en 5.124 habitantes. Cada año de 300 a 400

habitantes abandonan Niue. En 1964 el déficit entre los que se iban y los que volvían fue de 150.

*Acontecimientos políticos y constitucionales**Generalidades*

5. La Asamblea Legislativa de la Isla de Niue está formada por catorce miembros elegidos y el Comisionado Residente. Las ordenanzas necesitan el consentimiento de este último y no deben contrariar ninguna ley o reglamentación en vigor en Niue. En 1962 se estableció un Comité Ejecutivo, formado por tres miembros elegidos por la Asamblea Legislativa, con el Comisionado Residente como su presidente. Puede elevar informes y formular recomendaciones sobre cualquier asunto que le remita el Comisionado Residente o la Asamblea Legislativa.

6. En enero de 1965 el Secretario de Territorios Isleños, acompañado por un asesor sobre asuntos constitucionales, visitó a Niue para consultar a la Asamblea de la Isla de Niue y a la población sobre el tema de la evolución constitucional y para averiguar sus deseos sobre los futuros cambios constitucionales y la programación de estos cambios. En la discusión, los habitantes de Niue expresaron la voluntad de progresar gradualmente hacia cierta forma de libre determinación interna, manteniendo al mismo tiempo los vínculos más estrechos posibles con Nueva Zelanda. Los procedimientos de las reuniones fueron registrados en su totalidad en grabaciones y difundidos por las tardes por Radio Niue, y se informa que la recepción fue buena en todas las aldeas de la Isla.

7. En enero de 1966 el Ministro de Territorios Isleños visitó a Niue para celebrar conversaciones sobre su futura evolución. No se dispone de información sobre las conversaciones.

Consejos de aldea

8. El gobierno de la aldea ha estado principalmente en manos del miembro local de la Asamblea, del pastor y del agente de policía en cada aldea. La Asamblea ha convenido, en principio, la formación de consejos de aldea que serían responsables de los asuntos locales. En 1965 un funcionario superior del Gobierno de Niue iba a emprender una gira de estudios en el Territorio de Papua y Nueva Guinea, bajo el patrocinio de la Comisión del Pacífico Sur, para estudiar el gobierno de aldea y de distrito en este Territorio.

Situación económica

9. La economía de Niue se funda sobre la pesca y la agricultura de subsistencia, así como sobre la producción de unos pocos cultivos comerciales, principalmente copra y bananas, y de artículos de artesanía para la exportación. La naturaleza rocosa de gran parte de la isla la hace poco adecuada para la agricultura o la ganadería. Las exportaciones en 1964 ascendieron a 77.935 libras esterlinas, en comparación con 51.185 libras esterlinas en 1963. Las importaciones ascendieron a 228.210 libras esterlinas, en comparación con 163.443 libras esterlinas del año anterior. Casi el 74% de todas

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información sobre Niue y las Islas Tokelau ha sido tomada de informes publicados y de la información correspondiente al año que termina el 31 de marzo de 1965 transmitida el 14 de octubre de 1965 al Secretario General por Nueva Zelanda en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.

las importaciones provino de Nueva Zelandia, que recibió el 89% de las exportaciones de la isla. En 1964-1965 los ingresos y los gastos fueron de 235.043 libras esterlinas y 523.981 libras esterlinas, respectivamente, en comparación con 194.175 libras esterlinas y 382.436 libras esterlinas del año anterior. Los ingresos de Niue, derivados de sus exportaciones e impuestos, son insuficientes para equilibrar su presupuesto y Nueva Zelandia concede subsidios anuales con fines generales y de capitalización, así como para satisfacer los déficit del presupuesto. En 1964-1965 el subsidio ascendió a 301.300 libras esterlinas en comparación con 285.000 libras esterlinas del año anterior.

Situación social

Mano de obra

10. En marzo de 1965 la tarifa básica de salarios para trabajadores no especializados era de 1 chelín y 11 peniques por hora, de 2 chelines y 1 penique para estibadores y una escala variable para la mano de obra capacitada. No hay sindicatos registrados de trabajadores pero existe un comité para la determinación de asignaciones especiales para los estibadores, y los trabajadores tienen voz en ese comité.

Sanidad

11. El Departamento de Sanidad del Gobierno presta los servicios médicos bajo el control de un funcionario médico jefe. No hay práctica privada de medicina o de odontología. En marzo de 1965 el personal de 39 personas estaba compuesto por niueanos, con excepción del médico jefe y de cuatro enfermeras contratadas en Nueva Zelandia. Los gastos de los servicios sanitarios correspondientes al año que termina en marzo de 1965 ascendieron a 53.111 libras esterlinas. Toda la asistencia médica y odontológica es gratuita.

Situación de la enseñanza

12. La educación es gratuita y obligatoria de los seis a los catorce años, y la mayoría de los niños sigue en la escuela hasta cumplir los dieciséis años. La enseñanza posprimaria está al alcance de todos y la mayoría de los estudiantes que dejan la escuela primaria concurren a la escuela secundaria. Al 31 de marzo de 1965, concurrían 28 estudiantes a las escuelas secundarias de Nueva Zelandia en virtud del Plan de Formación del Gobierno de Nueva Zelandia y 6 seguían un curso de 3 años en la escuela de agronomía de Samoa Occidental. Los gastos de educación ascendieron a 100.060 libras esterlinas, en comparación con 70.090 libras esterlinas en 1963-1964.

2. Islas Tokelau

Generalidades

13. La población de las tres islas Tokelau ascendía a 1.835 habitantes el 25 de septiembre de 1964.

Desarrollo político

14. Se informa que en una reunión de dirigentes de Tokelau, celebrada en diciembre de 1964, decidieron que deseaban permanecer bajo la administración de Nueva Zelandia. Los dirigentes rechazaron propuestas de unión con Samoa Occidental independiente o con las Islas Cook. Se informa que estas decisiones se adoptaron después de que los dirigentes de Tokelau hubieron visitado

tanto Apia como Rarotonga para estudiar sus organizaciones administrativas. En enero de 1965, el Ministro de Territorios Isleños visitó el Territorio para celebrar conversaciones sobre su evolución constitucional. No se dispone de información sobre estas conversaciones. En enero de 1966, el Secretario de Territorios Isleños visitó de nuevo el Territorio a fin de discutir la evolución constitucional. Se comunica que esas discusiones figuran en una propuesta hecha por el Secretario para reasentar parte de la población en Nueva Zelandia en el curso de los próximos cinco años.

Situación económica

15. La economía de las Islas Tokelau se funda sobre cultivos de subsistencia, la pesca y la producción de copra para exportación. Los ingresos derivan principalmente de aranceles a la importación y la exportación, de beneficios comerciales y de la venta de sellos postales. El déficit anual entre los ingresos y los gastos locales se compensa mediante subsidios otorgados por el Gobierno de Nueva Zelandia. En 1964 los gastos ascendieron a 29.931 libras esterlinas. No se dispone de información sobre los ingresos locales.

Situación social

16. El Gobierno de Samoa Occidental proporciona servicios médicos al Territorio y su personal médico efectúa visitas periódicas a la isla. Dos funcionarios médicos de Samoa están estacionados en Tokelau. Actualmente, un natural de Tokelau sigue los cursos de la Escuela de Medicina de Suva, en Viti.

Situación de la enseñanza

17. Se informa que la asistencia escolar en el Territorio se aproxima mucho al 100%. La Administración de Tokelau concede becas para permitir que niños y funcionarios públicos reciban educación secundaria en Samoa Occidental. El Gobierno de Nueva Zelandia presta asistencia a los estudiantes y a los funcionarios públicos en virtud del Plan de Formación del Gobierno de Nueva Zelandia. El 31 de marzo de 1965 había en Nueva Zelandia 13 estudiantes del Territorio que seguían cursos de capacitación prolongados. Otros 29 estudiantes de Tokelau se capacitaban en Samoa Occidental y en Viti.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

18. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité II sobre Niue y las Islas Tokelau que figura como anexo al presente capítulo.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ II

19. El representante del Reino Unido reservó la posición de su Gobierno respecto al informe del Subcomité.

20. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité II, concebidas en la forma siguiente.

Conclusiones

21. a) El Comité Especial reitera las conclusiones que aprobó en 1964; b) El Comité Especial toma nota

con satisfacción de la declaración de la Potencia Administradora, según la cual la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sigue expresando los objetivos de su política en esas Islas; c) El Comité Especial toma asimismo nota con satisfacción de que la Potencia Administradora está dispuesta a recibir a una misión visitadora en esos Territorios, en caso de que esa visita forme parte de un viaje más largo por la región; d) El Comité Especial opina que los problemas peculiares debidos al tamaño, al aislamiento y a la escasez de recursos, aun siendo importantes de por sí, no deben demorar el cumplimiento de la resolución 1514 (XV) en esos Territorios.

Recomendaciones

22. a) El Comité Especial reitera las recomendaciones que aprobó en 1964; b) El Comité Especial reafirma el derecho inalienable del pueblo de los Territorios a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la Declaración contenida en la resolución 1114 (XV) de la Asamblea General; c) El pueblo de estas islas debería poder expresar sus deseos sobre las disposiciones de la resolución 1514 (XV) mediante procedimientos democráticos bien establecidos; d) Deberían tomarse otras medidas inmediatas para desarrollar y consolidar la estructura económica de estos Territorios en cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados; e) Es necesario que el Subcomité II haga una visita a los Territorios, lo cual le permitiría reunir toda la información posible y familiarizar al pueblo con la asistencia que pueden prestar las Naciones Unidas para la libre expresión de sus deseos en conformidad con la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV). A este respecto deben adoptarse las medidas necesarias para organizar una visita, en consulta con la Potencia Administradora.

ANEXO

[A/AC.109/L.318/Add.2]

Informe del Subcomité II

NIUE E ISLAS TOKELAU

Examen por el Subcomité

1. En sus sesiones 47a., 49a. y 54a., celebradas el 8 y 12 de agosto y el 2 de septiembre de 1966, respectivamente, el Subcomité se ocupó de Niue y las Islas Tokelau.

2. El Subcomité tuvo a la vista el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véase cap. XVI, párrs. 1 a 17).

3. Siguiendo el procedimiento acordado por el Comité Especial, el Presidente invitó al representante de Nueva Zelandia a participar en el examen de los dos Territorios.

4. En su declaración ante el Subcomité, el representante de Nueva Zelandia dijo que no se negaba el derecho del pueblo de Niue y de las Islas Tokelau a decidir libremente su futuro, que continuamente se les recordaban sus posibilidades de opción, que el texto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General había sido profusamente distribuido entre ellos en sus idiomas, y que el Gobierno de Nueva Zelandia llevaba varios años explicándoles que la relación colonial con Nueva Zelandia debía terminar. Sin embargo, actualmente deseaban, al parecer, que se mantuviera por tiempo indefinido un vínculo directo con Nueva Zelandia.

5. Señaló que Niue era la mayor de las cuatro islas, con una superficie de unas 100 millas cuadradas y unos 5.000 habitantes, y estaba situada a mitad de camino entre Tonga y las Islas Cook.

6. En 1962, se había sugerido a los habitantes de Niue que en lo futuro podían elegir entre cuatro posibilidades: independencia completa, integración con un Estado independiente, asociación a una federación polinesia (hipotética) o autonomía y asociación libre con algún otro Estado. La Asamblea de la Isla de Niue había rechazado por unanimidad las tres primeras posibilidades, y solicitado que el pueblo de Niue pudiera conservar la ciudadanía neozelandesa, y había propuesto que cualquier futuro cambio constitucional se orientara hacia alguna forma de autonomía, pero manteniendo los vínculos estrechos con Nueva Zelandia. Tal decisión no había sido un acto de libre determinación sino simplemente una indicación preliminar de la actitud de los habitantes de Niue.

7. Las autoridades de Nueva Zelandia habían redactado un documento en el que sugerían un programa para la transición hacia la autonomía y llamaban la atención sobre el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 1514 (XV). La rapidez de los cambios propuestos, que equivalían virtualmente a un gobierno con gabinete completo para 1966, había provocado considerable inquietud en la Asamblea de la Isla de Niue, la cual había solicitado que un grupo de expertos en asuntos constitucionales visitara la Isla y preparara una nueva serie de recomendaciones basadas en los puntos de vista de los isleños. Debía señalarse que, en ese caso de Niue, era el Gobierno de Nueva Zelandia el que instaba al progreso político y era el propio pueblo el que no mostraba mayor apresuramiento en ese sentido.

8. El Dr. C. C. Aikman, profesor de historia constitucional, y el Sr. J. M. McEwen, Secretario de Territorios Insulares y eminente autoridad sobre Polinesia, habían visitado la Isla, hablado con miembros de la Asamblea y con el público, y comprobado que la opinión se encontraba dividida en cuanto a la rapidez con que debía obtenerse la autonomía. Las razones de la actitud cautelosa de los habitantes de Niue eran al parecer una falta básica de confianza en su capacidad para la gestión de sus propios asuntos y el temor de que, como consecuencia del progreso político, se les pudiera suprimir o reducir el subsidio concedido por Nueva Zelandia, el cual, en los años recientes, representaba del 50% al 70% de los gastos totales del Gobierno en la Isla. Los asesores constitucionales les habían dicho que mientras no intentaran la gestión de sus propios asuntos no podrían saber si eran o no capaces y que, cualquiera que fuera su decisión sobre el futuro, ésta no afectaría la asistencia financiera que Nueva Zelandia les facilitaba. Sin embargo, no se habían desvanecido todavía sus temores a ese respecto.

9. Debido a ello, los asesores constitucionales habían recomendado en su informe que no se preparara un programa completo de autonomía, sino que se esbozaran las medidas inmediatas del proceso. En particular, debían adoptarse medidas prontas para establecer un sistema de nombramiento de miembros según el cual los representantes elegidos para el Comité Ejecutivo serían responsables ante la Asamblea de uno o varios departamentos gubernamentales. Uno de los miembros elegidos del Comité Ejecutivo sería nombrado jefe de Empresas Gubernamentales y hablaría en la Asamblea en nombre de la totalidad del Comité Ejecutivo. Se preveía que, como consecuencia de esta evolución, disminuiría progresivamente la función del Comisionado Residente en la administración cotidiana de la Isla.

10. En enero de 1966, la Asamblea de la Isla de Niue había suscrito las recomendaciones contenidas en el informe pero había decidido que el examen ulterior del mismo se aplazara hasta después de las elecciones generales, que se celebraron el 10 de abril de 1966 y en las cuales ese informe había sido uno de los asuntos sometidos al electorado. Como resultado de las elecciones se habían producido cuatro cambios en la composición de la Asamblea, que había decidido entonces proceder a la adopción del sistema de miembros. Se había elegido un nuevo Comité Ejecutivo y el Sr. R. Rex había sido elegido Jefe de Empresas Gubernamentales.

11. En consecuencia, Niue había realizado un progreso considerable hacia la autonomía, pues disponía de una Asamblea electiva, que desde 1962 fiscalizaba los ingresos recaudados en la localidad y la totalidad del subsidio de Nueva Zelandia, y

un Comité Ejecutivo que pronto representaría con más fidelidad al gabinete embrionario que pretendía ser.

12. La inseguridad que tan evidentemente sentían los niueanos sobre el futuro se basaba probablemente en "las especiales circunstancias de aislamiento geográfico y de las condiciones económicas" que se mencionaban en el último párrafo del preámbulo en la resolución 2069 (XX) de la Asamblea General. A consecuencia de esto, parecía que los niueanos sentían un estrecho vínculo sentimental con el grupo principal de los polinesios de Nueva Zelandia, vínculo que había sido reforzado por 60 años de contacto con administradores, maestros y pastores de Nueva Zelandia, así como por la emigración a este país.

13. Los niueanos se daban cuenta de que las posibilidades de ulterior desarrollo de la Isla eran limitadas, pues el aumento en la producción agrícola que era la única forma importante de obtener divisas y de incrementar mucho más la proporción del presupuesto recaudada localmente era una tarea lenta y especializada. Por esas razones, era comprensible su deseo de no comprometer el acceso directo al Erario de Nueva Zelandia, que era el que les abonaba más de la mitad de sus actuales gastos oficiales y les facilitaba también los medios para el desarrollo y las inversiones de capital. Sin embargo, Nueva Zelandia no consideraba que las condiciones económicas debían restringir necesariamente el progreso hacia la libre determinación de los niueanos los cuales estaban en libertad para decidir las nuevas medidas que desearan.

14. Los tres atolones apenas habitables del grupo de las Islas Tokelau, 300 millas al norte de Samoa, presentaban una serie de circunstancias básicamente diferentes. Su superficie total era de unas 4 millas cuadradas y ninguno de los islotes tenía más de un par de centenares de yardas de ancho. Estaban sometidos a veces a huracanes y la capa de tierra cultivable sobre base de coral era de poco espesor y escasa fertilidad; la precipitación pluvial era abundante pero irregular. Muchos de los naturales de Tokelau habían abandonado las Islas, más de 300 habían emigrado a Nueva Zelandia, y los 1.800 que quedaban llevaban una vida muy dura.

15. En el curso de los últimos años el Gobierno de Nueva Zelandia se había esforzado por exponer con imparcialidad a los habitantes de Tokelau las posibilidades de futuro desarrollo político, explicándoles que correspondía decidir a los propios isleños. En 1963, la primera reacción de los habitantes de Tokelau había sido mantener la relación actualmente existente con Nueva Zelandia, lo cual, dicho sea de paso, demostraba que la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General al grupo de las Islas Tokelau podría haber producido resultados diferentes de los deseados, por haberse adoptado una decisión prematura. Sin embargo, el Gobierno de Nueva Zelandia no estaba dispuesto a que se perpetuara la relación colonial y había sugerido que la solución más lógica para los naturales de Tokelau sería aprovechar los recursos y mano de obra capacitada de una comunidad polinesia vecina, uniéndose para ello al Estado independiente de Samoa Occidental o a las Islas Cook autónomas. Nueva Zelandia se había ofrecido a sufragar los gastos de administración del grupo durante muchos años, mediante la entrega de los subsidios anuales a la comunidad a la que se unieran, cualquiera que fuera, y había dispuesto que los representantes de la población de Tokelau visitaran Samoa Occidental y las Islas Cook. La asociación con las Islas Cook supondría la conservación de la ciudadanía neozelandesa y el derecho de entrada y de asentamiento sin restricciones en Nueva Zelandia, mientras que la asociación con Samoa Occidental reforzaría los lazos culturales y religiosos existentes entre los dos territorios. Al tener que decidir entre las dos alternativas, en un *fono* general celebrado en diciembre de 1964, los habitantes de Tokelau no optaron por ninguna de las dos, deseando y procurando, cosa bastante natural, sacar el máximo beneficio posible al seguir vinculados con Nueva Zelandia. En enero de 1966, el Ministro de Nueva Zelandia encargado de los Territorios Insulares había visitado las Islas Tokelau y en esa ocasión los naturales de Tokelau le confirmaron su deseo de permanecer unidos de alguna forma con Nueva Zelandia y conservar el derecho de emigrar a este país. El Gabinete de Nueva Zelandia había acordado ulteriormente que debían iniciarse

gestiones para una autonomía más amplia, dando para ello a los *fonos* — consejos de ancianos y cabezas de familia — carácter consultivo oficial en la determinación de prioridades de obras del Gobierno y en la preparación del presupuesto anual, y poniendo al mismo tiempo en funcionamiento un plan experimental para acelerar los proyectos existentes de ayuda a la emigración. Asimismo se mejoraría el sistema de enseñanza y se emprendería un extenso programa de obras públicas; para los cuatro años próximos el costo de las obras públicas ascendería a unos 270.000 dólares, aparte del presupuesto administrativo normal, que en 1966 ascendía a unos 120.000 dólares. Además, durante los dos años siguientes, el Gobierno elaboraría más detenidamente, en unión con el pueblo de Tokelau, el estatuto futuro de las Islas. En junio de 1966 un *fono* general de representantes de Tokelau había vuelto a confirmar de manera formal que los isleños deseaban permanecer unidos a Nueva Zelandia y habían manifestado su apoyo al plan experimental de emigración y a las medidas planeadas para mejorar las instalaciones de los atolones.

16. Por lo tanto, después de cierta renuencia inicial, Nueva Zelandia había decidido iniciar las gestiones para una asociación permanente con las Islas como deseaba el pueblo. Se fomentaría una mayor autonomía y era de esperar que el problema debido a un hacinamiento crónico se aliviaría mediante una mayor emigración a Nueva Zelandia, donde se esperaba que los naturales de Tokelau se asentaran fácilmente en la sociedad integrada de Nueva Zelandia, como había ocurrido con millares de polinesios procedentes de otros grupos insulares y de las propias Islas Tokelau. No obstante, todavía no se habían tomado decisiones definitivas sobre el futuro. Se preveía que en un porvenir relativamente próximo el pueblo de las Islas Tokelau ejercería su derecho a la libre determinación, después de considerar los resultados logrados en el intervalo y la situación existente. A los habitantes de Tokelau correspondería decidir el momento de hacerlo. Por su parte, Nueva Zelandia garantizaría que el intervalo se utilizara para poner al pueblo en las mejores condiciones posibles a fin de que pudiera decidir con conocimiento de causa y libertad.

17. De esta manera, los dos últimos territorios de Nueva Zelandia estaban progresando, quizás no hacia la solución clásica de la independencia soberana, sino hacia un futuro en el que podrían disfrutar de una vida holgada y segura. Con objeto de evitar malas interpretaciones, el orador señaló que Niue y las Islas Tokelau carecían de importancia estratégica o comercial para Nueva Zelandia. Era imposible construir puertos en ninguna de las Islas, ni un aeropuerto en las Islas Tokelau; no existía aeropuerto en Niue, aunque se esperaba que oportunamente podría construirse uno para reducir el aislamiento de la Isla y quizás para fomentar el turismo. En cuanto a las relaciones comerciales, Nueva Zelandia podría adquirir en otras partes a precios igualmente bajos, y en algunos casos más bajos, los escasos productos agrícolas que recibía de dichas Islas. Es más, las Islas Tokelau desde hacía 40 años y Niue desde hacía más de 60 años venían costando caras a Nueva Zelandia. Dejando aparte la cuestión de por qué Nueva Zelandia había asumido en principio la responsabilidad por las Islas, la razón básica para que siguiera haciéndose cargo de ellas era la obligación que sentía para con dos ramas de una raza que formaba una proporción grande y cada vez mayor de la propia población de Nueva Zelandia. Si llegara un momento en que los isleños no quisieran que continuara el vínculo, estaban en libertad para romperlo.

18. El representante de Chile dijo que la declaración del representante de Nueva Zelandia ante el Subcomité había demostrado una vez más la buena voluntad de la Potencia Administradora para llegar a una solución equitativa que permitiese a los habitantes de las Islas ejercer su derecho a la libre determinación.

19. El representante de Nueva Zelandia había señalado que en 1962, cuando su Gobierno había sugerido a los habitantes de Niue cuatro posibles soluciones para decidir su futuro político, la Asamblea de la isla había rechazado por unanimidad las tres primeras posibilidades que se les habían presentado, expresando su deseo de conservar la ciudadanía neozelandesa.

La Asamblea había propuesto reformas constitucionales que permitiesen a los isleños crear un sistema de autonomía mediante el cual pudiesen conservar estrechos vínculos con Nueva Zelandia. Había decidido asimismo que un equipo de expertos en materias constitucionales visitara la isla y redactara una serie de recomendaciones, previa consulta con la Asamblea.

20. Según el informe, el Territorio de Niue había avanzado enormemente hacia la meta del gobierno propio, al controlar no sólo su presupuesto interno sino también los fondos de la ayuda que le otorgaba Nueva Zelandia. Su Comité Ejecutivo tendía cada vez más a asumir el carácter de un gabinete. Debía recordarse, sin embargo, que tanto Niue como las Islas Tokelau estaban en condiciones de gran aislamiento geográfico, hecho que dificultaba las relaciones con el resto del mundo. Además, en vista de la pequeñez de su territorio, la Potencia Administradora estaría obligada a realizar esfuerzos especiales para asegurar a los habitantes de estas Islas el pleno goce de sus derechos dentro de la comunidad mundial.

21. El representante de Sierra Leona señaló que la mayoría de la población de Niue y de las Islas Tokelau parecía desear una estrecha asociación con Nueva Zelandia y que más de la mitad deseaban emigrar a ese país, a pesar de que el Gobierno de Nueva Zelandia les había informado de su derecho al gobierno propio y a la independencia, conforme a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En realidad, era difícil imaginar cómo esas pequeñas comunidades que se hallaban prácticamente aisladas y que contaban con escasos recursos naturales, podrían bastarse a sí mismas y ejercer las funciones de Estado independiente. En tales circunstancias, la Potencia Administradora debería haber proporcionado servicios de educación superiores al nivel primario y haber estimulado a los habitantes a que aprendiesen el inglés. Debería haberse enviado a las islas mucho antes profesores de inglés neozelandeses.

22. El representante de la India dijo que el detallado informe presentado por el representante de Nueva Zelandia en la 47a. sesión del Subcomité demostraba que la Potencia Administradora era sincera en sus intentos de ayudar al pueblo de Niue y de las Islas Tokelau, especialmente en materia económica. Esperaba que la Potencia Administradora haría cuanto estuviese a su alcance para elevar aún más el nivel de vida de la población así como las condiciones sociales y educativas de los Territorios. Sin embargo, no se sentía enteramente satisfecho en cuanto a la información relativa a la evolución política y constitucional. De la declaración del representante de Nueva Zelandia se deducía que el progreso constitucional de los Territorios era lento debido a la renuencia de los habitantes, que contrarrestaba el entusiasmo de la Potencia Administradora. Era comprensible que, en vista de la situación imperante, los habitantes de Niue se inclinasen a favor del gobierno propio y de vínculos muy estrechos con Nueva Zelandia, de cuya ayuda económica y de otra índole dependían; pero era posible que en una etapa ulterior se decidiesen por la independencia completa, como había reconocido el propio representante de Nueva Zelandia. De todos modos, era importante señalar que la Asamblea de la Isla de Niue había rechazado la idea de la integración con Nueva Zelandia, lo cual significaba que existía la posibilidad de que Niue se convirtiese más adelante en un Estado independiente. Era de esperar que la Potencia Administradora lo tuviese en cuenta y fomentase el desarrollo económico de la Isla a fin de que tal solución fuese posible. Depender constantemente de Nueva Zelandia no era bueno para la dignidad y el respeto propio de la población. La Potencia Administradora debería asegurar a los habitantes que tendrían libertad para cambiar su condición cuando lo desearan, y que la asistencia económica prestada por ella no se vería afectada por ninguna decisión que los habitantes pudiesen adoptar. Añadió que había un punto sobre el cual hubiera deseado pedir aclaraciones al representante de Nueva Zelandia: en 1963, la Asamblea de la Isla de Niue había resuelto que se consultase a la población del Territorio, en votación secreta, si aprobaba el proyecto de programa constitucional o si consideraba que éste era demasiado acelerado; con tal motivo se decidió pedir asesoramiento al Gobierno de Nueva Zelandia sobre la redacción de las preguntas del plebiscito. Al parecer, todavía no se había

llevado a cabo dicho plebiscito y el orador quisiera saber si ello era cierto.

23. El representante de Nueva Zelandia, respondiendo a las preguntas que se le habían hecho, dijo que comunicaría al Gobierno de Nueva Zelandia y a la población de los Territorios el contenido de las observaciones formuladas durante la sesión. El representante de Sierra Leona se había referido a la falta de educación secundaria en los Territorios. Los maestros neozelandeses que se pensaba enviar a cada uno de los atolones de las Islas Tokelau contribuirían a elevar el nivel de educación así como el del conocimiento del inglés. Hasta ahora, los niños del Territorio que habían llegado a la educación secundaria eran enviados a escuelas en Nueva Zelandia. En Niue existía, en cambio, la enseñanza obligatoria hasta los catorce años de edad, y la mayoría de los niños continuaban en la escuela hasta los dieciséis. Además, en marzo de 1966 había 32 niños procedentes de Niue en las escuelas secundarias de Nueva Zelandia. Tanto los estudiantes de Niue como los de las Islas Tokelau asistían a instituciones regionales como la Escuela de Medicina de las Islas Viti, el Colegio de Agricultura de Avele y el Colegio Normal de Samoa Occidental; un estudiante de Niue y otro de las Islas Tokelau estaban cursando estudios en universidades de Nueva Zelandia y se había organizado un sistema de capacitación dentro del empleo en Samoa Occidental o en Nueva Zelandia para los funcionarios procedentes de los Territorios.

24. Respondiendo a una pregunta del representante de la India, el representante de Nueva Zelandia reafirmó que la cuestión de la futura condición de los Territorios todavía no había sido resuelta y que aún no se había realizado ningún acto oficial de libre determinación. Añadió que, a su juicio, no se había realizado ningún plebiscito conforme a la decisión tomada por la Asamblea de la Isla de Niue en 1963 por considerarse que dicha decisión había quedado sin efecto, ante la decisión, tomada más tarde por la Asamblea, de pedir a un equipo de expertos en cuestiones constitucionales que redactara un nuevo programa. Toda la cuestión se había presentado a la decisión de la población en las elecciones celebradas el 10 de abril de 1966 y la nueva Asamblea había expuesto claramente sus opiniones sobre el ritmo futuro de la evolución.

25. El Gobierno de Nueva Zelandia se había comprometido ya a continuar su ayuda económica a Niue, cualquiera fuese la decisión que tomasen los habitantes acerca de su futuro, pero el orador señalaría la observación del representante de la India a la atención del Gobierno.

Conclusiones y recomendaciones del Subcomité

26. El Subcomité, si bien reitera las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Comité Especial en 1964, ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

a) El Subcomité toma nota con satisfacción de la declaración de la Potencia Administradora, según la cual la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sigue expresando los objetivos de su política en esas Islas.

b) El Subcomité toma asimismo nota con satisfacción de que la Potencia Administradora está dispuesta a recibir a una misión visitadora en esos Territorios, en caso de que esa visita forme parte de un viaje más largo por la región.

c) El Subcomité opina que los problemas peculiares debidos al tamaño, al aislamiento y a la escasez de recursos, aun siendo importantes de por sí, no deben demorar el cumplimiento de la resolución 1514 (XV) en esos Territorios.

Recomendaciones

a) El Subcomité reafirma el derecho inalienable del pueblo de los Territorios a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

b) El pueblo de estas islas debería poder expresar sus deseos sobre las disposiciones de la resolución 1514 (XV) mediante procedimientos democráticos bien establecidos.

c) Deberían tomarse otras medidas inmediatas para desarrollar y consolidar la estructura económica de estos Territorios en cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados.

d) Es necesario que el Subcomité haga una visita a los Territorios la cual le permitiría reunir toda la información posible y familiarizar al pueblo con la asistencia que pueden prestar las Naciones Unidas para la libre expresión de sus deseos en conformidad con la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV). A este respecto deben adoptarse las medidas necesarias para organizar una visita, en consulta con la Potencia Administradora.

CAPÍTULO XVII*

NUEVAS HEBRIDAS

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. Después de su estudio de las Nuevas Hébridas en noviembre de 1964, el Comité Especial recomendó, entre otras cosas, que las Potencias administradoras adoptaran urgentemente medidas para la rápida aplicación de la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV). Consideró que al pueblo del Territorio se le debería permitir expresar su voluntad de conformidad con esa resolución mediante un proceso democrático bien establecido basado en el principio del sufragio universal de los adultos. Consideró que las Potencias administradoras debían adoptar medidas para acelerar el adelanto social y económico del Territorio. Estimó, además, que convendría enviar una misión visitadora para evaluar el clima político y las aspiraciones del pueblo, así como las medidas que cabría tomar para preparar esa visita en consulta con las Potencias administradoras (A/5800/Rev.1¹, cap. XX, párrs. 92 a 96).

2. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial relacionados con ese Territorio (A/5800/Rev.1, cap. XX; y A/6000/Rev.1², cap. XIX), aprobó la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965, por la cual hacía suyas las conclusiones y recomendaciones que en ella figuraban y pedía encarecidamente a las Potencias administradoras que pusieran en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Pidió a las Potencias administradoras que permitieran a las misiones de las Naciones Unidas visitar el Territorio y les ofrecieran toda su cooperación y asistencia. Por último, pidió al Comité Especial que examinara la situación del Territorio e informara a la Asamblea General, en su vigésimo primer período de sesiones, sobre la aplicación de esa resolución.

B. INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Introducción

3. Ya hay información sobre las Nuevas Hébridas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (*ibid.*). A continuación se da información complementaria sobre acontecimientos recientes³.

Generalidades

4. En 1962 el total de la población del Territorio se calculaba en 61.500 habitantes, de los cuales 55.000 eran melanesios. Los 6.000 habitantes restantes eran principalmente europeos, chinos y polinesios.

Gobierno

5. El protocolo anglofrancés de 1914 hizo de las Nuevas Hébridas una región de influencia conjunta, en la que los súbditos y ciudadanos de las dos Potencias disfrutaban de idénticos derechos de residencia, protección personal y comercio. Cada una de las dos Potencias tiene soberanía sobre sus propios nacionales, pero no existe una soberanía sobre el Territorio a la cual estén sujetos los indígenas, ni respecto de una Potencia ni respecto de la otra.

6. Existen tres administraciones diferentes. Las administraciones nacionales británica y francesa están encabezadas por comisionados residentes que actúan en nombre de los Altos Comisionados británico y francés para el Pacífico Occidental, los cuales residen en Honiara (Islas Salomón) y Nouméa (Nueva Caledonia), respectivamente. El Gobierno del Condominio, la administración conjunta, está constituido por dos comisionados residentes que actúan conjuntamente, y se encarga de los servicios comunes, entre los que se incluyen correos y telégrafos, obras públicas, puertos, sanidad, aduanas e ingreso local.

7. El Territorio no tiene consejo legislativo. Desde 1951 ha tenido un Consejo Asesor presidido por los comisionados residentes. Consta de seis miembros funcionarios y de veinte miembros no funcionarios. Desde junio de 1964 han sido elegidos ocho de estos últimos: dos son nacionales de las Nuevas Hébridas, dos son británicos y dos franceses. Los otros miembros no funcionarios son designados; seis son de las Nuevas Hébridas, tres son británicos y tres franceses.

Desarrollo político y constitucional

8. En julio de 1965 el Secretario de Estado para las Colonias celebró conversaciones en París con otros funcionarios franceses y británicos de alta jerarquía respecto de las Nuevas Hébridas. Según se informó, las conversaciones se refirieron a problemas administrativos e incluyeron la legislación laboral, el sistema de tenencia

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información que aquí se presenta ha sido tomada de informes publicados y de la información transmitida al Secre-

tario General en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 1° de septiembre de 1965, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 1964. La información más reciente transmitida por Francia sobre las Nuevas Hébridas se refiere al año 1963.

de tierras y la coordinación de los planes de desarrollo francés y británico en el Condominio. A principios de 1966 se iban a celebrar nuevas conversaciones en Londres con el Ministro de Territorios de Ultramar de Francia y otros funcionarios.

9. Al inaugurarse, en septiembre de 1965, el décimo período de sesiones del Consejo Consultivo, los Comisionados Residentes, en una declaración conjunta, señalaron que se estaban estudiando cambios en la administración de las Nuevas Hébridas. Manifestaron que, como resultado de las conversaciones celebradas en julio en París, se les había pedido que estudiaran diversos aspectos administrativos y las posibilidades de efectuar algunas reformas constitucionales, judiciales y agrarias. Se presentó entonces una moción por la cual se pedía a los Gobiernos británico y francés que efectuasen una declaración acerca de su política sobre el futuro del Territorio.

Situación económica

10. La mayor parte del territorio de las Nuevas Hébridas es montañoso y densamente boscoso; grandes zonas del interior están inhabitadas. Su economía se basa principalmente en la horticultura de subsistencia y en la producción de copra. Otros cultivos comerciales incluyen el cacao y el café. Recientemente, la economía se ha diversificado un poco más mediante la producción de manganeso para la exportación (desde 1962) y el crecimiento de la industria del pescado congelado (desde 1957). Las demás industrias se limitan a ciertas fábricas pequeñas y a las artes y oficios autóctonos.

11. La copra, el manganeso y el pescado representaron aproximadamente el 94% de todas las exportaciones de 1964, valor cuyo monto fue de 3.238.970 libras esterlinas⁴, lo cual significó un incremento de alrededor del 40% con respecto al año anterior. Las importaciones, por una cuantía de 2.422.157 libras esterlinas, aumentaron en 1% aproximadamente. La mayoría de las exportaciones fueron hechas a Francia y el Japón, y la mayoría de las importaciones procedieron de Australia y Francia.

12. El presupuesto de la Administración Conjunta sufraga los servicios que se administran en común y contribuye al costo de los servicios médicos y de educación administrados separadamente por las administraciones británica y francesa, que tienen presupuestos distintos.

13. La Administración Conjunta cobra impuestos para obtener ingresos con los cuales se financian los servicios públicos conjuntos de las Nuevas Hébridas y se pagan subvenciones a algunos servicios nacionales. Aproximadamente el 70% de los ingresos totales proceden de los derechos sobre las importaciones y las exportaciones; los indígenas no están sujetos a ningún impuesto a la renta. Las principales partidas de gastos son las obras públicas, los servicios médicos y de educación y los servicios postales.

14. Los ingresos y los gastos del Gobierno Conjunto en 1964 fueron en total de 966.357 y 924.179 libras esterlinas, respectivamente. Se calcula que los ingresos y los gastos locales de la Administración nacional britá-

nica en 1964-1965 ascendieron a 94.578 y 475.511 libras australianas, respectivamente. El Reino Unido sufragó el déficit. No se dispone de ninguna información con respecto a los ingresos y a los gastos de la Administración nacional francesa en 1964.

Situación social

Mano de obra

15. La mayor parte de la población indígena se dedica principalmente a la producción de cultivos de subsistencia y comerciales. Casi toda la mano de obra empleada trabaja en las plantaciones de copra, en barcos comerciales, en establecimientos comerciales o en servicios gubernamentales. En general, hay escasez de mano de obra calificada y semicalificada. No se dispone de ninguna información acerca del número total de las personas que trabajan a jornal. Los jornales varían según el tipo de trabajo y teniendo en cuenta si se incluyen raciones o no. La semana de trabajo es, en promedio, de 44 horas. No hay sindicatos obreros, aunque existen disposiciones al respecto.

Sanidad

16. Además de los servicios médicos que proporcionan por separado las administraciones nacionales británica y francesa, funcionarios médicos británicos y franceses dirigen un servicio médico común que tiene a su cargo medidas de prevención contra el paludismo y las epidemias, el control de cuarentenas, la inspección médica de las plantaciones y otros lugares de trabajo, y la atención médica gratuita para la población indígena.

17. En 1964-1965 los gastos de sanidad realizados por la Administración Conjunta ascendieron a 62.987 libras esterlinas, lo cual representó alrededor del 8% de sus gastos totales. Excluyendo los subsidios, se calcula que los gastos hechos en el mismo período por la Administración nacional británica fueron de 59.457 libras australianas, esto es, aproximadamente el 16% de sus gastos totales.

Situación de la enseñanza

18. La gran mayoría del número total de alumnos concurren a escuelas misionales. Además, la Administración nacional francesa cuenta con 17 escuelas primarias, y en 1964 la Administración nacional británica estableció una escuela normal. El propio Gobierno del Condominio no tiene servicios educativos, pero concede un subsidio anual (en la actualidad de 30.000 libras esterlinas) a las administraciones nacionales, las cuales, a su vez, prestan asistencia a las escuelas de las misiones.

19. Se calcula que entre el 65% y el 70% de los niños de edad escolar reciben enseñanza primaria. La enseñanza secundaria del Territorio se encuentra en la etapa inicial, y se envía a los niños a las escuelas secundarias de territorios vecinos. En 1965 la Administración nacional británica aprobó la concesión de un subsidio de 126.000 libras esterlinas destinado a la construcción de una escuela secundaria con capacidad para 150 estudiantes.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

20. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del

⁴Una libra esterlina equivale a 250 francos franceses o a 1,25 libras australianas.

Subcomité II sobre Nuevas Hébridas que figura como anexo al presente capítulo.

21. El representante del Reino Unido hizo constar las reservas de su delegación respecto a dicho informe.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ II

22. En su 468a. sesión, celebrada el 19 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó las conclusiones y recomendaciones del Subcomité II acerca de Nuevas Hébridas, concedidas en la forma siguiente.

Conclusiones

23. a) El Comité Especial considera que se han logrado muy pocos progresos en la aplicación de las recomendaciones que figuran en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales; b) Opina que ni en las instituciones políticas ni en el mecanismo ejecutivo está bien representado el pueblo del Territorio; c) Se da cuenta de los problemas peculiares que se plantean en el Territorio, por tratarse de un Condominio.

Recomendaciones

24. a) El Comité Especial reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con los términos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; b) Debe ofrecerse cuanto antes al pueblo del Territorio la oportunidad de expresar sus deseos acerca de las disposiciones contenidas en la resolución 1514 (XV) mediante métodos democráticos bien establecidos y basados en el principio del sufragio universal de los adultos; c) Deben adoptarse con urgencia las medidas requeridas para cumplir la resolución 1514 (XV); d) Hay que acelerar el progreso económico y social del Territorio; e) Las Potencias administradoras deben completar rápidamente las reformas en la administración del Condominio; f) Es necesario que el Subcomité II haga una visita al Territorio, que sería útil para evaluar el ambiente político y las aspiraciones del pueblo. Los arreglos necesarios para tal visita podrían realizarse en consulta con las Potencias administradoras.

ANEXO

[A/AC.109/L.318/Add.3]

Informe del Subcomité II

NUEVAS HÉBRIDAS

Examen de la cuestión por el Subcomité

1. El Subcomité se ocupó de las Nuevas Hébridas en sus sesiones 47a., 49a., 50a. y 54a., celebradas los días 8, 12 y 17 de agosto y 2 de septiembre de 1966.

2. El Subcomité tuvo a la vista el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véase párrafos 1 a 19 del presente capítulo).

3. De conformidad con el procedimiento convenido por el Comité Especial, el Presidente invitó al representante del Reino Unido a participar en los debates sobre el examen del Territorio.

4. En su declaración ante el Subcomité, el representante del Reino Unido dijo que sólo hablaría del Gobierno del Reino Unido y sus responsabilidades en el Condominio de las Nuevas

Hébridas. El acontecimiento más significativo desde la última reseña que había hecho su delegación el 24 de septiembre de 1964 (A/AC.109/102, anexo, págs. 22 a 24) había sido la celebración de conversaciones ministeriales sobre el archipiélago entre el Reino Unido y Francia. La primera serie había tenido lugar en París en julio de 1965, cuando el Secretario de Estado británico para las Colonias y el Ministro de Estado francés para los Territorios de Ultramar examinaron diversos problemas administrativos de interés común relativos al Condominio. El Secretario de Estado británico había declarado más tarde que si no se quería dificultar el progreso del Territorio habría que revisar y poner al día varios aspectos de los acuerdos sobre administración interna, y se había convenido en celebrar otras conversaciones en el plano local y en el metropolitano, sobre cuestiones tales como la legislación laboral, tenencia de tierras y coordinación de los planes británico y francés de desarrollo del Condominio. Otra serie de conferencias ministeriales había tenido lugar en Londres el 11 de julio de 1966. En esa fecha, el actual Secretario de Estado británico para las Colonias y el Ministro de Estado francés para los Departamentos y Territorios de Ultramar se habían entrevistado y cambiado opiniones sobre asuntos relativos a la administración del Condominio.

5. Entre otras novedades figuraba la decisión tomada en el décimo período de sesiones del Consejo Consultivo de las Nuevas Hébridas (septiembre de 1965), de ampliar la composición del Comité Permanente del Consejo agregando a tal efecto otros dos naturales de las Nuevas Hébridas; por lo tanto, el Comité se componía entonces de dos franceses, dos británicos y cuatro naturales de las Nuevas Hébridas.

6. En agosto de 1965 se había aprobado con cargo al Fondo del Reino Unido para el Desarrollo y Bienestar Colonial un subsidio de 73.100 libras esterlinas destinado a la reconstrucción del hospital en Tanna, y más tarde se habían asignado 104.000 libras esterlinas para una nueva escuela secundaria en Vila y 59.000 para repavimentar el aeródromo de Baverfield. El Gobierno del Reino Unido había autorizado en virtud de la *Overseas Development and Service Act* de 1965 un crédito de 900.000 libras esterlinas para el desarrollo durante el período que termina en marzo de 1968. Además, había preparado un nuevo plan de desarrollo para ese período.

7. El representante de Sierra Leona, tomando nota de la información que se le había proporcionado al Subcomité, declaró que era lamentable que el Gobierno de Francia, la otra Potencia Administradora del Condominio, no hubiese podido facilitar la información correspondiente al período transcurrido desde 1964.

8. Su delegación estimaba que, hasta el presente, la evolución política y social del Territorio había sido indebidamente lenta. No había Consejo Legislativo, y la mitad de los 20 miembros no funcionarios del Consejo Consultivo eran europeos, lo que resultaba injusto si se tenía en cuenta que de una población de más de 60.000 habitantes, sólo unos 5.000 eran europeos. Además, la presencia de seis miembros funcionarios en el Consejo Consultivo y el hecho de que la Administración Conjunta no aceptase necesariamente sus recomendaciones, indicaban que no era un órgano representativo. Las Potencias administradoras debían hacer todo lo posible para establecer un órgano de gobierno formado por miembros elegidos mediante sufragio universal y velar por que se consultase sin restricciones a la población del Territorio sobre su condición política futura.

9. El confuso sistema de administración tripartita había dificultado inevitablemente el progreso de las Nuevas Hébridas. Parecía que se había hecho muy poco para estimular la integración de los diversos grupos lingüísticos; no había ningún movimiento laboral organizado, las posibilidades de empleo eran escasas, y los servicios de enseñanza secundaria, por lo menos en lo que respecta a la administración británica, resultaban inadecuados. El Territorio necesitaba evidentemente un gobierno común y servicios sociales y docentes comunes, y no debía verse entorpecido en su avance hacia la libre determinación por los distintos sistemas administrativos de las Potencias que lo controlaban.

10. El representante de Polonia manifestó que, aunque el Territorio estaba todavía en las primeras etapas del desarrollo, poseía recursos económicos valiosísimos — un suelo fértil y algunos yacimientos de minerales — que, con la debida orientación y ayuda de las Potencias administradoras, podían ofrecer una base adecuada para la autarquía. La Administración británica había hecho muy poco hasta el presente por mejorar la parte del sistema docente que dependía de ella, y no era extraño, por lo tanto, que el desarrollo político hubiese sido tan lento. Las Potencias administradoras tenían la responsabilidad de velar por que los habitantes del Territorio recibieran una educación que les preparase para ejercer lo antes posible su derecho a la libre determinación. Además, en vista de la condición jurídica de que disfrutaban los europeos, era importantísimo inculcar en el ánimo de la población autóctona el hecho de que, al lograr la independencia, podrían suprimirse todos los derechos especiales de que gozaban los ciudadanos de las Potencias administradoras.

11. El representante de la India observó que apenas había habido progreso constitucional en las Nuevas Hébridas desde que el Subcomité había examinado el Territorio por última vez en 1964. Desde 1951 no se habían modificado ni las funciones ni la competencia del Consejo Consultivo; éste seguía siendo un órgano compuesto de miembros designados predominantemente por nombramiento, con una representación europea excesiva y sin poderes legislativos. Las recientes conversaciones entre los Gobiernos de las Potencias administradoras demostraban que era necesario introducir mejoras en la administración de las islas. Además, el hecho de que en 1965 el Consejo Consultivo hubiese aprobado una moción en la que se pedía a los Gobiernos de Francia y el Reino Unido una declaración de política sobre el porvenir del Territorio, suscitaba serias dudas sobre si la población se daba bien cuenta de su derecho a la libre determinación y la independencia.

12. El representante del Reino Unido manifestó que la moción a que había aludido el representante de la India había sido aceptada por los Comisionados Residentes para enviarla

a los Gobiernos Metropolitanos, y que en el momento oportuno se daría al Consejo Consultivo una respuesta.

Conclusiones del Subcomité

13. El Subcomité considera que se han logrado muy pocos progresos en la aplicación de las recomendaciones que figuran en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

14. El Subcomité opina que ni en las instituciones políticas ni en el mecanismo ejecutivo está bien representado el pueblo del Territorio.

15. El Subcomité se da cuenta de los problemas peculiares que se plantean en el Territorio, por tratarse de un Condominio.

Recomendaciones del Subcomité

16. El Subcomité reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con los términos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

17. Debe ofrecerse cuanto antes al pueblo del Territorio la oportunidad de expresar sus deseos acerca de las disposiciones contenidas en la resolución 1514 (XV) mediante métodos democráticos bien establecidos y basados en el principio del sufragio universal de los adultos.

18. Deben adoptarse con urgencia las medidas requeridas para cumplir la resolución 1514 (XV).

19. Hay que acelerar el progreso económico y social del Territorio.

20. Las Potencias administradoras deben completar rápidamente las reformas en la administración del Condominio.

21. Es necesario que el Subcomité haga una visita al Territorio; que sería útil para evaluar el ambiente político y las aspiraciones del pueblo. Los arreglos necesarios para tal visita podrían realizarse en consulta con las Potencias administradoras.

CAPÍTULO XVIII*

SAMOA AMERICANA, GUAM Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. Después de examinar la situación en Samoa Americana, Guam y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico en noviembre de 1964, el Comité Especial aprobó unas conclusiones y recomendaciones respecto de Samoa Americana en cuya virtud, entre otras cosas, se pedía a la Potencia Administradora que adoptara medidas tendientes a aplicar las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En ellas declaraba que la población debía tener, lo antes posible, la facultad de expresar plenamente sus deseos con respecto a su futuro *status*, y en caso de que se solicitara, se podría proporcionar asistencia de las Naciones Unidas al respecto. Consideraba que convendría enviar una misión visitadora al Territorio a fin de obtener información directa y que era posible, en consulta con la Potencia Administradora, disponer lo necesario para celebrar esa visita (A/5800/Rev.1¹, cap. XVI, párrs. 69 a 71).

2. Por lo que hace a Guam, el Comité Especial aprobó unas conclusiones y recomendaciones con arreglo a las cuales, entre otras cosas, se pedía a la Potencia Administradora que tomara urgentemente las medidas adecuadas para aplicar la Declaración que figuraba en la resolución 1514 (XV) en el Territorio de Guam. En la resolución se afirma que la población de Guam podría disponer de la asistencia de las Naciones Unidas y de la Potencia Administradora a tal fin en caso de que la solicitara, y que convendría enviar una misión visitadora y que se podría, en consulta con la Potencia Administradora, disponer lo necesario para realizar dicha visita. Asimismo se pedía a la Potencia Administradora que proporcionara nuevos servicios de enseñanza y formación profesional a la población del Territorio, y que aplicara tan rápidamente como fuera posible sus planes destinados a diversificar la economía y crear nuevas industrias, proporcionando así una base más sólida a la estructura económica de Guam (*ibid.*, cap. XVII, párrs. 99 a 102).

3. En cuanto al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, el Comité Especial recomendó, entre otras cosas, a la Autoridad Administradora que el Congreso de Micronesia fuese investido de todos los poderes necesarios para despejar el camino hacia la pronta

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

ejecución de la resolución 1514 (XV). El Comité concluyó que debía permitirse a la población del Territorio que expresara sus deseos con respecto a su futura situación de conformidad con las disposiciones de dicha resolución, mediante procedimientos democráticos debidamente establecidos y bajo la fiscalización de las Naciones Unidas. También consideró que debían adoptarse medidas a fin de eliminar pronto las disparidades en el sistema de salarios, establecer una institución de enseñanza superior y facilitar el desempeño por habitantes del Territorio de altos cargos de responsabilidad. El Comité pidió a la Autoridad Administradora que estableciera urgentemente un plan económico general encaminado a desarrollar y reforzar la economía y a incrementar la producción. Finalmente, estimó que una misión visitadora al Territorio sería útil, por lo cual, en consulta con la Autoridad Administradora, podrían adoptarse medidas para disponer esa visita (*ibid.*, cap. XVIII, párrs. 61 a 66).

4. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial relativos a Samoa Americana y Guam (A/5800/Rev.1, caps. XVI y XVII; y A/6000/Rev.1², caps. XV y XVI), aprobó la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965, por la que hacía suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuraban y pedía encarecidamente a la Potencia Administradora que pusiese en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Pedía asimismo a la Potencia Administradora que permitiera a las misiones de las Naciones Unidas visitar los Territorios y les ofreciera toda su cooperación y asistencia. Por último pedía al Comité Especial que examinara la situación en los Territorios e informara a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de dicha resolución.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS

1. SAMOA AMERICANA

Introducción

5. Acerca de Samoa Americana figuran ya datos en los informes del Comité Especial presentados a la Asamblea General en su decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XVI; y A/6000/Rev.1, cap. XV). A continuación se da información complementaria³.

Generalidades

6. El censo de 1960 estableció que la población era de 20.051 habitantes. En julio de 1965 se calculaba la población en 26.000 habitantes.

Evolución política y constitucional

7. La actual Constitución de Samoa Americana que entró en vigor el 17 de octubre de 1960, prevé su propia revisión o enmienda automáticas al término de cinco

años. No se dispone de información relativa a audiencias que sobre propuestas de revisión de algunas secciones de la Constitución fueron celebradas por un Comité Constitucional nombrado para revisar la Constitución en 1965.

Situación económica

8. Los subsidios del Congreso de los Estados Unidos y los créditos directos ascendieron a unos 12 millones de dólares en el año fiscal de 1964, en comparación con 13 millones de dólares recibidos en 1963. Los ingresos locales totalizaron 2.478.330 dólares, lo que representa un aumento de 793.121 dólares en relación con el año anterior.

9. Las exportaciones declinaron de 12.707.373 dólares en el año fiscal anterior, a 10.529.649 dólares en el año fiscal de 1964. Se informa que la declinación se debe a la disminución en el valor de los embarques de atún envasado que representan más del 90% del valor de todas las exportaciones. Las exportaciones de copra mostraron una leve disminución en su tonelaje, pero un aumento de su valor, en comparación con el año fiscal anterior: 720 toneladas, valuadas en 124.350 dólares en 1964, contra 770 toneladas valuadas en 121.035 dólares en 1963.

10. La economía del Territorio se vio considerablemente reforzada en 1964 cuando iniciaron sus operaciones una nueva fábrica de conserva de atún y una fábrica de envases. La nueva fábrica de conservas junto con la fábrica de conservas de atún existente proveen empleo ahora a casi 700 hombres y mujeres locales, más del doble del número de puestos de que antes se disponía en esta industria. La economía se vio reforzada aún más, en diciembre de 1965, cuando se inauguró el Hotel Pago Pago Intercontinental. El hotel es propiedad de la American Samoan Development Corporation, cuyos accionistas son, por ley, samoanos. Se espera que el nuevo hotel, junto con el nuevo aeropuerto apto para aviones a reacción, originará un aumento en el número de turistas que visita el Territorio.

Situación social

Mano de obra

11. Hay escasez de mano de obra agrícola para trabajar en las plantaciones. Un número creciente de migrantes entra al Territorio en busca de trabajo y se están imponiendo restricciones a la inmigración. El Gobierno es el mayor empleador de mano de obra. Le siguen en importancia las compañías de conservas de pescado, de flete y transporte, de comercialización de derivados del petróleo y los comerciantes. Estos empleadores contrataron a 3.972 trabajadores en 1964, en comparación con 3.594 trabajadores en 1963.

Sanidad

12. El total de los gastos de los servicios médicos aumentó de 818.891 dólares en 1963 a 1.000.726 dólares en 1964. El número de camas de hospital aumentó de 194 a 198. El número de médicos aumentó de cinco a siete en 1964.

13. En julio de 1965 se inauguró un servicio de planificación de la familia, al alcance de todas las mujeres casadas que lo soliciten voluntariamente, para combatir el alto índice de crecimiento demográfico. A juicio del

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información que aquí se presenta proviene de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por los Estados Unidos de América en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta el 4 de febrero de 1966, correspondiente al año que terminó el 30 de junio de 1964.

Gobernador, si no se contiene el coeficiente de natalidad, los recursos naturales del Territorio no serán suficientes para satisfacer las necesidades futuras.

Situación de la enseñanza

14. En octubre de 1964 se introdujo la televisión educativa cuando entró en funcionamiento una estación de televisión con tres canales. La estación de televisión difunde programas educativos para niños samoanos en 31 nuevas aulas ubicadas en cinco escuelas. Se espera que las redes de televisión también inicien programas de alfabetización de adultos y otros programas que traten temas como métodos modernos de agricultura, sanidad, higiene de la aldea y gobierno propio local. Se autorizó la suma de 2 millones de dólares para reemplazar las 44 escuelas elementales de aldea existentes por 26 escuelas consolidadas de aldea. Ya se ha iniciado la construcción de ocho de las nuevas escuelas, que incluirán ocho grados en lugar de seis. Se espera que el programa de consolidación de escuelas y el uso de la televisión permitirán que un cuadro reducido de maestros calificados pueda llegar a un número máximo de alumnos, así como el establecimiento de un sistema escolar coordinado, con normas uniformes.

15. En el año académico 1962-1963 el Gobierno concedió 31 becas de estudio y el mismo número en 1963-1964. El número de estudiantes a quienes se les prorrogaron las becas de estudio ascendió de 29 en 1962-1963 a 56 en el año académico transcurrido. Además, de los alumnos que estudian con becas oficiales había aproximadamente 50 samoanos americanos que asistían a colegios universitarios sin ayuda del Gobierno; esta cifra representa un aumento de un 20% en comparación con el año académico precedente de 1962-1963.

16. Al 30 de junio de 1964, había 8.132 alumnos samoanos matriculados en las escuelas elementales, secundarias y postsecundarias, lo que representa un aumento de 348 estudiantes. El número de alumnos en las escuelas públicas aumentó de 6.316 a 6.659, mientras que el número de alumnos en las escuelas privadas se elevó de 1.408 a 1.473.

2. GUAM

Introducción

17. En los informes del Comité Especial presentados a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo, figuraba ya cierta información sobre Guam (A/5800/Rev.1, cap. XVII; y A/6000/Rev.1, cap. XVI). A continuación se da información complementaria⁴.

Generalidades

18. La población de Guam (con exclusión de los transeúntes que residen en las reservas militares) en abril de 1964 comprendía: 38.369 guameños; 1.573 ciudadanos de Estados Unidos continental; 612 hawaianos; 2.839 filipinos y 1.799 de otras nacionalidades. La población total de 44.892 habitantes representa un aumento de 584 sobre el año anterior.

⁴La información que aquí se presenta se basa en los informes publicados y en la información transmitida al Secretario General por los Estados Unidos de América en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta el 31 de agosto de 1965, referente al año que terminó el 30 de junio de 1964.

Evolución política y constitucional

19. El Gobernador de Guam, que es la cabeza del ejecutivo y el administrador de los asuntos de gobierno, es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos de América.

20. Se informa que en febrero de 1966 el Presidente de la Legislatura de Guam declaró que Guam deseaba elegir a su propio gobernador, estar representado en el Congreso de los Estados Unidos por un delegado sin voto y poder votar en la elección del Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos. También se informa que a fines de marzo el Presidente de la Legislatura y un grupo de legisladores asistió a audiencias celebradas en el Congreso sobre un proyecto de ley de la Administración presentado por el Departamento del Interior destinado a instituir un gobernador elegido de Guam, que podría ser destituido por el Presidente "con debida causa".

Elecciones

21. Guam tiene una legislatura unicameral de 21 miembros elegidos por sufragio universal de los adultos. Cada dos años se celebran elecciones generales. La última elección se realizó en noviembre de 1964, cuando correspondieron 13 asientos a miembros del Partido Territorial y ocho asientos a miembros del Partido Democrático, que está afiliado al Partido Democrático de los Estados Unidos.

Situación económica

22. Las instalaciones militares de Guam constituyen una fuente importante de ingresos para sus civiles, y prácticamente la totalidad de la economía del territorio se funda directa o indirectamente sobre estos salarios. La agricultura es el otro elemento principal de la economía, pero su desenvolvimiento se ve afectado por la facilidad de empleo que ofrecen las instalaciones militares y el Gobierno civil, que pagan sueldos relativamente buenos.

23. Como parte del programa de recuperación, encaminado a remediar los efectos de los tifones de 1962 y 1963, el Congreso de los Estados Unidos asignó 19.500.000 dólares para ser gastados en el año fiscal de 1965. Se preveía la construcción inmediata de varias escuelas, un nuevo aeropuerto, otros edificios del Gobierno y un nuevo puerto comercial. Se ha iniciado un proyecto para alentar el turismo con el establecimiento de una Comisión de Turismo de Guam y la contratación de un consultor por jornada completa. Dentro del Departamento de Comercio, se ha creado recientemente una División de Desarrollo Industrial para acelerar el progreso económico del Territorio, con objeto de promover la rehabilitación y expansión de los negocios y estimular la corriente de capitales hacia el Territorio.

Situación social

Mano de obra

24. En 1964, se iniciaron programas para resolver la escasez persistente de mano de obra local. Se esperaba que se aceptaran más aprendices en virtud de la *Manpower Development and Training Act*. Se pensaba iniciar en septiembre de 1964 el programa de capacitación para aprendices patrocinado conjuntamente por el Gobierno de Guam y por la Guam Contractor's Association.

25. La economía ha continuado absorbiendo a casi todos los trabajadores disponibles en el mercado de trabajo. En el año fiscal que terminó en junio de 1964 el Servicio de Empleo de Guam, afiliado al Servicio de Empleo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, informó que la mayoría de las vacantes se encontraban en los proyectos de reconstrucción y que se trataba de puestos para obreros capacitados que generalmente se llenaban con trabajadores del exterior. Cualquier actividad comercial privada u organismo gubernamental que desee importar trabajadores del exterior o prorrogar su contrato debe presentar una solicitud de empleo al Servicio. El Servicio tiene la política de seleccionar a ciudadanos calificados de los Estados Unidos antes que el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos emita el certificado de autorización a las firmas y organismos que buscan mano de obra del exterior. De las 8.628 oportunidades de empleo ofrecidas por el Gobierno o las industrias privadas que consideró el Servicio en el año que se examina, 6.736 correspondían a empleadores que buscaban contratar a trabajadores del exterior.

Situación de la enseñanza

26. El presupuesto total del Departamento de Educación para el año fiscal de 1964 fue de 4.277.088 dólares, de los cuales 3.130.286 dólares correspondían a asignaciones locales y 1.146.802 dólares fueron contribuidos por los programas de asistencia federal de los Estados Unidos.

27. Al final del año académico de 1964 había 14.920 estudiantes matriculados en las escuelas de nivel elemental y secundario. Además, la escuela técnica y profesional de Guam matriculó a 209 estudiantes que recibirían formación profesional en las siguientes especialidades: automotores, diseño, electricidad y refrigeración. La escuela profesional también dictó un programa de cursos vespertinos de formación profesional para adultos, al que concurrieron aproximadamente 400 alumnos en el año escolar de 1963-1964. El número total de alumnos del colegio de Guam en mayo-junio de 1964 ascendía a 2.721, de los cuales 943 estaban inscritos para seguir cursos reconocidos como de categoría universitaria fuera de la Universidad, en Anderson Air Force Base y en Agat Extension.

3. TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Introducción

28. Alguna información sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico figura ya en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en sus periodos de sesiones decimonoveno y vigésimo (A/5800/Rev.1, cap. XVIII; y A/6000/Rev.1, cap. XVII). A continuación se da información complementaria⁵.

Generalidades

29. Al 30 de junio de 1965, la población del Territorio era de 90.596 habitantes, en comparación con 88.215 en junio de 1964.

⁵ La información que aquí se presenta ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida por los Estados Unidos de América a las Naciones Unidas, en aplicación del Artículo 88 de la Carta, el 25 de mayo de 1966 para el año que terminó el 30 de junio de 1965.

Evolución constitucional

30. El Consejo de Micronesia, una legislatura bicameral compuesta de una Asamblea General y una Cámara de Representantes, celebró su primer período de sesiones en julio y agosto de 1965. La organización y los poderes del Congreso se describen en el informe anterior del Comité Especial a la Asamblea General. Sus miembros son elegidos en elecciones bianuales por votación secreta de los residentes del Territorio que son ciudadanos del mismo y tienen 18 o más años.

31. La orden No. 2882 del Secretario del Interior creó el Congreso el 28 de septiembre de 1964 y definió sus poderes legislativos. Estos últimos prevén, entre otras cosas, que ninguna disposición legislativa podrá ser incompatible con las disposiciones siguientes: a) los tratados o acuerdos internacionales de los Estados Unidos; b) las leyes de los Estados Unidos aplicables al Territorio en fideicomiso; c) las órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos y las del Secretario del Interior; o d) los artículos 1 a 12 (Carta de Derechos) del Código del Territorio en fideicomiso, disposiciones todas ellas que constituyen las leyes y reglamentos fundamentales aplicables a todos los residentes del Territorio. El Congreso tiene autoridad para fijar impuestos, participar en la preparación del presupuesto anual del Territorio y remitir al Secretario del Interior para medidas ulteriores la legislación vetada dos veces por el Alto Comisionado.

32. En las disposiciones monetarias promulgadas por el Congreso de Micronesia no se preverá la consignación de fondos presupuestarios que excedan las cantidades disponibles provenientes de los ingresos recaudados en aplicación de las leyes tributarias y otras disposiciones fiscales del Territorio en fideicomiso. El Congreso no tiene facultades para hacer consignaciones presupuestarias superiores a los ingresos internos, pero está autorizado a revisar el proyecto de presupuesto elaborado por el Alto Comisionado antes que éste lo presente definitivamente al Secretario del Interior para solicitar fondos federales. Con respecto a tales secciones del proyecto de presupuesto, el Alto Comisionado adoptará las recomendaciones del Congreso que juzgue oportunas, pero transmitirá al Secretario del Interior todas las recomendaciones que no haya adoptado.

33. En cualquiera de sus períodos de sesiones ordinarios, el Congreso puede recomendar, por mayoría de dos tercios de los miembros de cada cámara, la introducción de enmiendas a la orden No. 2882 del Secretario del Interior.

Administración pública

34. El 30 de junio de 1965, el número de micronesios que ocupaban altos cargos, profesionales y ejecutivos, era de 128, lo que representaba un aumento de 20 sobre el año anterior. En ese mismo período, los micronesios que ejercían funciones profesionales, administrativas y de fideicomiso aumentó de 1.250 a 1.980. El número de funcionarios no indígenas disminuyó de 319 a 318 en el mismo período.

35. En su presente informe anual (véase párr. 42 *infra*) la Autoridad Administradora declaró que tres altos cargos administrativos estaban ocupados por micronesios y que a un Administrador Adjunto de Distrito, originario de Micronesia, se le había concedido una beca Parvin para graduados en administración pú-

blica con objeto de cursar estudios postgraduados en régimen de internado en la Universidad de Princeton. En septiembre de 1965, un micronesio fue designado Administrador Adjunto del Distrito de las Islas Marshall, siendo el primer micronesio en recibir tal nombramiento.

36. En marzo de 1966, en aplicación de la resolución conjunta del Congreso de Micronesia solicitando del Alto Comisionado que elaborara propuestas para dotar a los funcionarios micronesios del Gobierno del Territorio en fideicomiso con un reglamento de funcionarios públicos, se estableció un grupo de trabajo encargado de hacer propuestas para una ley sobre funcionarios públicos. En la actualidad, los micronesios ocupan sus puestos conforme a la política y el procedimiento establecidos por el Alto Comisionado.

Situación económica

37. La economía del Territorio se basa fundamentalmente en la agricultura de subsistencia, en la pesca y en la producción de un solo cultivo comercial, la copra. En 1964-1965, el valor de las exportaciones de copra fue de 2.525.117 dólares, en comparación con 2.215.448 dólares el año anterior.

38. En su informe anual, la Autoridad Administradora declara que el principal acontecimiento económico en el año fue la firma de un contrato con una destacada empresa de consultores en desarrollo económico a fin de preparar un programa bienal de desarrollo económico para Micronesia. Esta empresa hará un inventario de los activos, pasivos y recursos de Micronesia que serán utilizados para preparar un programa de desarrollo económico integrado a largo plazo para el Territorio. La formulación del programa de desarrollo se hará paralelamente a su aplicación real.

39. En su 33º período de sesiones, se comunicó al Consejo de Administración Fiduciaria que la empresa había presentado un informe previo en el que se fijaban las regiones que, según aquella, ofrecían mayores posibilidades de desarrollo económico, y que la misma haría posteriormente recomendaciones concretas al respecto.

40. El Territorio en fideicomiso depende en gran parte de las subvenciones de los Estados Unidos para equilibrar sus presupuestos. En 1962, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley tendiente a elevar de 7.500.000 a 17.500.000 dólares el límite reglamentario de las consignaciones para este Territorio en fideicomiso. Durante los ejercicios económicos de 1963, 1964 y 1965, el Congreso de los Estados Unidos consignó un total de 47.500.000 dólares para la administración del Territorio, cuyos déficit presupuestarios han venido rebasando los 15 millones de dólares desde 1963. Durante el ejercicio económico que terminó el 30 de junio de 1965, los gastos totales aumentaron en 1.419.967 dólares, alcanzando 23.500.000 dólares, de los cuales sólo 2 millones fueron financiados con ingresos locales. El proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1966, por la suma de 17.344.000 dólares de gastos, ha sido ya aprobado.

41. En su 33º período de sesiones, se informó al Consejo de Administración Fiduciaria que el Congreso de los Estados Unidos estaba estudiando un proyecto de ley autorizando la consignación de 172 millones de dólares para gastos de capital en el Territorio

en fideicomiso durante los próximos cinco años, además de un presupuesto ampliado de funcionamiento por un total de 152 millones de dólares para el quinquenio. En el proyecto de ley también se pide que se elimine el tope actual de 17.500.000 dólares por año para actividades civiles del Gobierno.

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria en 1966

42. En su 33º período de sesiones, junio y julio de 1966, el Consejo de Administración Fiduciaria terminó su examen del informe anual de la Autoridad Administradora para el período comprendido entre el 1º de julio de 1964 y el 30 de junio de 1965⁶.

43. En una carta de fecha 25 de julio de 1966 (A/AC.109/191), el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria comunicó al Presidente del Comité Especial que el Consejo había aprobado un informe sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico para presentarlo al Consejo de Seguridad⁷. El informe contiene, además de las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria y las observaciones hechas a título individual por los miembros del mismo, información detallada sobre las condiciones políticas, económicas, sociales y educativas del Territorio.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

44. En su 469ª sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité II sobre Samoa Americana, Guam y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico que se reproduce como anexo al presente capítulo.

45. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la situación en los Territorios a que se refería el informe que se examinaba mostraba que la Potencia Administradora no había tomado todavía las medidas necesarias para que el pueblo de los Territorios pudiera ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia, y que tampoco había tomado medidas para aplicar la resolución 2069 (XX) de la Asamblea General. A pesar de esta resolución, los Estados Unidos se habían negado a cooperar con las Naciones Unidas y no habían permitido que una misión visitadora fuera a Guam y a Samoa Oriental. Esta actitud de parte de una Potencia Administradora era digna de censura.

46. Con respecto al desarrollo político, económico y social de los Territorios, dijo que la política norteamericana no se guiaba por los intereses del pueblo sino por el objetivo de convertir los Territorios en un apéndice económico y estratégico de la metrópoli. En el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico la Potencia Administradora todavía no había adoptado medidas para que el pueblo estableciera órganos legislativos y ejecutivos que le prepararan para la autodeterminación

⁶ Estados Unidos de América, *18th Annual Report to the United Nations on the Administration of the Trust Territory of the Pacific Islands, July 1, 1964 to June 30, 1965*, Department of State Publication 8064 (Washington, U. S. Government Printing Office, 1966) (en inglés solamente). Transmisión a los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria por nota del Secretario General (T/1652).

⁷ *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Primer Año, Suplemento Especial No. 1.*

y la independencia. Se solía decir que los micronesios no estaban preparados para dirigir sus propios asuntos, pero esa opinión había sido impugnada, por ejemplo, por el Vicecanciller del East-West Centre, en donde los habitantes del Territorio recibían capacitación.

47. Añadió que la Potencia Administradora no trataba de diversificar la economía de los Territorios sino que se limitaba a desarrollar las ramas en que estaban interesados los Estados Unidos. Según la prensa norteamericana, la situación económica de las Islas del Pacífico era peor que bajo la dominación japonesa, y también el pueblo de Samoa Oriental había criticado la forma en que los Estados Unidos descuidaban el desarrollo de la isla. El bajo nivel de la economía se debía en gran parte al papel que desempeñaban los monopolios extranjeros. Las dos enlatadoras de pescado de Samoa Oriental eran propiedad de compañías norteamericanas. En las Islas del Pacífico la pesca estaba controlada por la Van Camp Sea Food Company de Long Beach, California. La compañía Jones and Guerrero tenía gran importancia en la vida económica de Guam, y los Estados Unidos concedían incentivos tributarios a las compañías que desarrollaban actividades en el Territorio.

48. Apuntó que otro asunto grave era el uso de los Territorios con fines militares. La economía de Guam y de Samoa Oriental dependía en gran parte de las bases militares norteamericanas. Se había utilizado el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico para efectuar ensayos de cohetes y de proyectiles balísticos intercontinentales, y en las Islas había establecidas radioemisoras militares y estaciones de rastreo de satélites. La base de Guam tenía particular importancia para las actividades norteamericanas en el Asia Sudoriental y se utilizaba para el almacenamiento de bombarderos nucleares B-52, mientras que en la base naval de la isla se estacionaban submarinos portadores de proyectiles Polaris con cargas nucleares. Se admitía abiertamente que los Estados Unidos no tenían la intención de dar la independencia a las Islas del Pacífico, las cuales se consideraban de importancia estratégica. La tentativa de transformar los territorios bajo administración norteamericana en bases militares era una violación de la Carta, de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y de la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General, que el Comité debería condenar.

49. El representante de la República Unida de Tanzania indicó que su delegación no oponía ninguna objeción al informe, pero quería señalar ciertos puntos que no se reflejaban en él completamente. En las conclusiones del Subcomité se mencionaba que la economía de Guam dependía de las actividades militares y de otra índole del Gobierno de los Estados Unidos. Como sabían todos los miembros del Comité, Guam se utilizaba como avanzada de las actividades militares norteamericanas en el Asia Sudoriental, particularmente en Viet-Nam, y este aspecto de la cuestión no se reflejaba en las recomendaciones del Subcomité. Dijo que su país se oponía a que los países extranjeros, y sobre todo territorios coloniales, se utilizaran como bases militares, en particular como bases en una guerra activa. Por lo tanto, la delegación del orador quería que se hiciera una referencia a esa cuestión en las recomendaciones. El empleo de Guam como base militar ponía en peligro la vida del pueblo de Guam, que vivía en servidumbre colonial y no tenía voz ni voto en la dirección de sus propios asuntos.

50. La representante de los Estados Unidos de América declaró que era completamente inexacto afirmar que el pueblo de Guam vivía en servidumbre colonial y no tenía voz ni voto en la dirección de sus asuntos. Los miembros del órgano legislativo de Guam eran elegidos por el pueblo a base del sufragio universal de adultos, y habían aprobado por unanimidad diversas resoluciones en apoyo del esfuerzo militar de los Estados Unidos en el Pacífico, esfuerzo que, como el pueblo de Guam comprendía, se llevaba a cabo tanto en su defensa como en defensa de toda la región.

51. El representante de la República Unida de Tanzania adujo que las actividades militares norteamericanas constituían otro asunto que podría examinarse en otro foro, pero ello no obstante Guam era un territorio no autónomo y hasta que obtuviera la independencia la delegación de la República Unida de Tanzania lo consideraría como sujeto a servidumbre colonial.

52. El representante de Bulgaria apuntó que a él también le sorprendía que en las recomendaciones del Subcomité no se mencionara una cuestión tan importante como la de la base militar en Guam. Los peligros que entrañaba la existencia de bases militares en territorios dependientes habían sido expuestos en resoluciones anteriores del Comité Especial y de la Asamblea General. Además, la cuestión de las bases militares extranjeras y su uso para combatir movimientos de liberación era objeto de particular atención en el presente período de sesiones de la Asamblea General. Por consiguiente, parecería muy apropiado que se mencionara el problema de la base de Guam, que las fuerzas de los Estados Unidos utilizaban para efectuar operaciones contra otros pueblos y países de la región.

53. La representante de los Estados Unidos de América declaró que la base no constituía amenaza alguna para el pueblo de Guam y no representaba obstáculo alguno para su progreso; la base tenía un largo historial de defensa de los Estados Unidos y de la libertad. La historia mostraba que los Estados Unidos no tenían propósitos agresivos: no se habían anexo ningún territorio a raíz de la segunda guerra mundial y habían ayudado a Filipinas a lograr la independencia. Los Estados Unidos verían satisfechos el día en que fueran innecesarias todas esas instalaciones militares, pero mientras tanto debían continuar adoptando las medidas que juzgaran adecuadas para garantizar su seguridad y cumplir con sus compromisos. Las instalaciones militares de Guam tenían muy poco que ver con las atribuciones del Comité.

54. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que no podía estar de acuerdo con la argumentación de la delegación de los Estados Unidos, de que la base de Guam no representaba un obstáculo para el progreso de la población del Territorio. El escritor norteamericano Julius Pratt había descrito la dependencia de los pueblos de Samoa Oriental y Guam de las bases militares, señalando que dichas bases habían sustraído a muchos jóvenes de las tareas agrícolas con el resultado de que los Territorios dependían aún más de las importaciones de alimentos y ropa. Había muchas pruebas de que la población de Guam no se había beneficiado de la existencia de las bases de los Estados Unidos allí. La población autóctona de Guam se alistaba en el ejército norteamericano y se la enviaba a luchar en Viet-Nam. La prensa de los Estados Unidos había informado que en dicha guerra ha-

bían muerto varios naturales de Guam. A la delegación de la URSS no le sorprendía la afirmación de los Estados Unidos de que las bases se estaban utilizando para la defensa de la "libertad", pero ésta difícilmente era una definición correcta de la intervención de los Estados Unidos en Viet-Nam.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ II

55. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que su delegación apoyaba las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité, pero estimaba que podrían complementarse con otras recomendaciones. Por ejemplo, se podría pedir a la Potencia Administradora que devolviera a los habitantes todas las tierras enajenadas con fines militares, que dismantelara todas las bases y que no estableciera ninguna otra base. Debía condenarse el empleo de las bases para llevar a cabo operaciones contra los pueblos del Asia Sudoriental; debía confirmarse el derecho del pueblo a utilizar sus propios recursos naturales, y debían abolirse todas las leyes que concedían privilegios a compañías extranjeras. También debían condenarse los planes tendientes a la fusión de los Territorios con la metrópoli. Sólo así se podría garantizar el derecho del pueblo a la libre determinación y al control de su propio porvenir.

56. El representante de Australia dijo que Australia, como miembro del Subcomité II, no se oponía a la aprobación del informe de tal Subcomité, pero deseaba exponer que mantenía esencialmente las mismas reservas que había formulado durante los debates del Subcomité.

57. La representante de los Estados Unidos de América declaró que deseaba afirmar, en primer lugar, que su delegación no pensaba que las recomendaciones y conclusiones del informe del Subcomité se aplicaban al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Ese Territorio había sido designado zona estratégica y, en virtud del Artículo 83 de la Carta, todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas habían de ejercerse por el Consejo de Seguridad; el Consejo de Administración Fiduciaria debía informar al Consejo de Seguridad, y no a la Asamblea General, acerca de la evolución de tales Territorios.

58. Con respecto a Samoa Americana, la oradora observó que en las conclusiones figuraba una referencia a "medidas positivas", pero no creía que se hubiese prestado la debida importancia a la evolución reciente. Un comité nombrado a petición del órgano legislativo de Samoa había llevado a cabo un completo estudio de la Constitución. En Guam se habían adoptado medidas encaminadas a hacer electivo el cargo de jefe ejecutivo. Otro hecho que la Unión Soviética había pasado por alto era que el pueblo de Guam poseía los plenos derechos de la ciudadanía norteamericana, y que el pueblo de Samoa tenía los derechos de los nacionales norteamericanos. Los habitantes de esos Territorios sentían en general el deseo de continuar estrechamente asociados con los Estados Unidos, como la propia oradora había podido comprobar en una visita reciente.

59. Añadió que la delegación de los Estados Unidos había pedido, en los debates del Subcomité, que en las recomendaciones se hiciera una referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, puesto que era indispensable que se tuvieran presentes todas las posibilidades previstas por la Asamblea para esos Territo-

rios; estimaba que el informe sería incompleto sin dicha referencia.

60. Respecto a la cuestión de las misiones visitadoras, los Estados Unidos opinaban que sería difícil justificar el envío de tales misiones a territorios que constituían sociedades libres y abiertas, donde existía un alto nivel de desarrollo general.

61. La oradora pidió que se hicieran esas ideas en relación con la decisión que tomara el Comité acerca del informe del Subcomité.

62. El representante de la República Unida de Tanzania manifestó que su delegación no aprobaba la mención de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en las recomendaciones; siempre había visto con aprensión las referencias a dicha resolución. La resolución 1514 (XV) de la Asamblea tenía un alcance sumamente amplio y parecía suficiente una referencia a esa resolución.

63. El representante del Reino Unido reservó la posición de su Gobierno respecto al informe del Subcomité.

64. En su 469a. sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó el informe del Subcomité II sobre Samoa Americana, Guam y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, así como sus conclusiones y recomendaciones, concebidas en la forma siguiente.

Conclusiones

65. a) El Comité Especial estima que, aunque la Potencia Administradora ha adoptado algunas medidas positivas, el progreso hacia la libre determinación y autonomía plenas no es adecuado.

b) La Potencia Administradora conserva todavía poderes considerables de fiscalización en las esferas ejecutiva y legislativa, restringiendo en esa forma el ejercicio del gobierno propio por la población de los Territorios. Las instituciones políticas y el mecanismo ejecutivo no son plenamente representativos del pueblo.

c) Toma nota de los diversos planes anunciados por la Potencia Administradora para robustecer la economía de los Territorios. Estima que la Potencia Administradora debiera intensificar sus esfuerzos para explotar y desarrollar los recursos propios de los Territorios. Está enterado particularmente de la dependencia en que se encuentra la economía de Guam respecto a las actividades militares y de otros órdenes del Gobierno de los Estados Unidos.

d) Toma nota de que se espera que en un futuro próximo el Congreso de los Estados Unidos promulgue la legislación que dispone la elección directa del Gobernador de Guam. También toma nota de que en octubre de 1966 se ha de convocar una convención constituyente en Samoa Americana para que redacte una nueva constitución del Territorio. A pesar de estos hechos, el Comité Especial toma nota de que no se ha elaborado un programa de medidas eficaces para la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Recomendaciones

66. a) El Comité Especial reafirma el derecho inalienable de la población de Samoa Americana, Guam y del Territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico

a la libre determinación y la independencia de conformidad con la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

b) La Potencia Administradora debe acelerar el desarrollo político ulterior de los Territorios mediante la ampliación de las funciones y poderes de las legislaturas y el traspaso de la autoridad ejecutiva a la población autóctona.

c) El Comité Especial insta a la Potencia Administradora a que facilite más el crecimiento económico de los Territorios, mediante el pleno desarrollo de su potencial industrial y agrícola y a que — especialmente en lo que se refiere a Guam — aplique con la mayor rapidez posible sus planes de diversificación de la economía. La asistencia de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados podría ser utilizada con máxima eficacia a este respecto.

d) Se pide a la Potencia Administradora que amplíe los servicios de enseñanza y formación profesional para la población de los Territorios.

e) La visita a los Territorios por el Comité Especial es necesaria y sería sumamente útil, ya que, además de familiarizar a los Estados Miembros con las necesidades y aspiraciones de la población, incrementaría también en las poblaciones la conciencia de los derechos que las Naciones Unidas les han garantizado.

ANEXO

[A/AC.109/L.318/Add.4]

Informe del Subcomité II

SAMOA AMERICANA, GUAM Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Examen por el Subcomité

1. En sus sesiones 48a., 49a., 50a., 51a., 52a., 53a. y 55a., celebradas los días 9, 12, 17, 23, 25 y 29 de agosto y 7 de septiembre de 1966, el Subcomité se ocupó de Samoa Americana, Guam y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico.

2. El Subcomité tuvo a la vista los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XVIII, párrs. 1 a 43).

3. El representante de los Estados Unidos de América manifestó que, desde la última vez que el Subcomité se ocupó de Samoa Americana y Guam, se había registrado en los Territorios un progreso continuo en el campo económico, social y político. Se habían hecho esfuerzos ininterrumpidos para proporcionar a Samoa Americana una sólida base económica. La construcción de un nuevo aeropuerto para aviones de reacción y de un nuevo hotel había aumentado los servicios turísticos de la Isla, en tanto que una nueva fábrica de conservas de atún y para la elaboración del coco había creado más empleos. En cuanto a la educación, la revisión completa del sistema escolar, la construcción de nuevas escuelas y el empleo de los métodos pedagógicos más avanzados, incluso la televisión, permitían ahora que todos los niños en edad escolar recibieran instrucción proporcionada por expertos y contaran con excelentes servicios de enseñanza. En la esfera política, se había confiado la revisión automática de la Constitución de Samoa Americana de 1960 a un Comité encargado de revisar la Constitución, que podría presentar enmiendas o preparar un proyecto revisado. El Comité había terminado sus trabajos y sus propuestas se presentarían a una convención constituyente que se reuniría en octubre de 1966. El proyecto de nueva Constitución que pudiera aprobar la convención se presentaría en noviembre al electorado, para su ratificación.

4. El progreso político de Guam continuaba. Hacía ya mucho tiempo que la población disfrutaba de autonomía por intermedio de una Asamblea Legislativa unicameral que tenía

amplia autoridad, sobre todo en cuestiones de impuestos y asignaciones de crédito para el funcionamiento del gobierno local. El Presidente de los Estados Unidos designaba todavía al Gobernador de Guam, pero la Cámara de Representantes de los Estados Unidos había aprobado ya y enviado al Senado una ley que preveía la elección del Gobernador por el pueblo. Guam continuaba avanzando económicamente, y desde la aprobación de la *Guam Rehabilitation Act*, el gobierno federal y el local colaboraban para mejorar los servicios públicos y habían iniciado un sistema de planificación del desarrollo económico. Durante el año fiscal que termina en junio de 1967, se habían asignado 29.300.000 dólares de los 45 millones de dólares que se proporcionarían en virtud de la *Guam Rehabilitation Act*, y hasta el 3 de junio de 1966 se habían gastado 13.700.000 dólares, incluidos 6.500.000 dólares para servicios educativos; el resto sería utilizado para ampliar los sistemas de energía eléctrica e hidráulico, construir un nuevo terminal aéreo y empezar las obras de un nuevo puerto comercial. Con créditos asignados en virtud de esa misma ley se había financiado también un estudio económico especial de Guam en el que se había subrayado que, para acelerar el desarrollo económico, era indispensable que los gobiernos local y federal continuaran sus esfuerzos. Con tal fin, la Asamblea Legislativa de Guam había establecido un organismo de desarrollo económico con amplias facultades en materia de comercio, agricultura, industria y turismo. Dicho organismo era una corporación pública cuya función consistía en supervisar un programa integrado para el desarrollo económico de Guam y servir de catalizador de las empresas privadas. Tenía facultades para realizar investigaciones, formar y administrar su propia industria, conceder préstamos, vender bonos, contratar su propio personal y fijar sus sueldos, y construir y administrar fábricas e instalaciones en diversas esferas económicas; el organismo ofrecía incentivos en materia impositiva a las nuevas empresas comerciales que reunieran ciertos requisitos. Al igual que muchas islas tropicales con muy pocos recursos naturales, Guam consideraba el turismo como una fuente de ingresos muy prometedora. Se estaba planeando la construcción de dos hoteles para turistas que según se esperaba quedarían terminados al cabo de dos años, y se estaba intensificando la promoción del turismo. Se confiaba en que los nuevos servicios permitirían a esa industria desempeñar un papel importante en el desarrollo de la economía de Guam.

5. Con referencia al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, el representante de los Estados Unidos remitió a los miembros del Subcomité a las declaraciones hechas por su delegación en el último período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria. En esas declaraciones se describían detalladamente los esfuerzos que estaba haciendo el Gobierno de los Estados Unidos para promover el bienestar económico, social y político de los habitantes del Territorio en fideicomiso.

6. El representante de la India declaró que los esfuerzos realizados por la Potencia Administradora en Samoa Americana y Guam estaban lejos de satisfacer las solicitudes del Comité Especial. Se había informado al Subcomité de que la próxima medida que habría de tomarse en materia de autonomía interna en Guam sería la elección directa del Gobernador. Esta medida había sido prometida durante el debate sobre el Territorio por el Comité Especial en 1964 y cabía esperar que el Senado de los Estados Unidos no tardara demasiado en aprobar las medidas legislativas necesarias, que ya habían sido aprobadas por la Cámara de Representantes. Los poderes de la Asamblea Legislativa de Guam seguían siendo limitados y el Gobernador y el Congreso de los Estados Unidos tenían todavía la facultad de vetar todas las leyes promulgadas por dicha Asamblea. El representante de la India hubiera deseado tener más informaciones sobre este aspecto de la cuestión. Durante el debate sobre el Territorio celebrado en 1964, muchos miembros del Comité Especial habían expresado su seria preocupación por la dependencia de la economía de Guam de las instalaciones militares de los Estados Unidos en el Territorio. La delegación de la India había tomado nota con satisfacción de los esfuerzos de la Potencia Administradora por dar una base más firme a la estructura económica de Guam, en particular de la creación de un organismo de desarrollo económico, pero le hu-

biera complacido poder disponer de algunos datos estadísticos que dieran una idea de los progresos realizados. Era de fundamental importancia que la Potencia Administradora aplicara, lo antes posible, las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General así como las recomendaciones formuladas por el Comité Especial en 1964.

7. Por lo que se refería a Samoa Americana la delegación de la India hubiera querido disponer de más detalles acerca de las propuestas relativas a un comité para revisar la Constitución, que iban a ser presentadas a la convención constituyente en octubre de 1966. Sin una información detallada, era imposible juzgar los progresos realizados hasta entonces en materia de gobierno propio, pero de las informaciones disponibles se deducía que era muy poco lo que se había hecho a fin de aumentar los poderes de la asamblea legislativa local. El poder ejecutivo estaba exclusivamente en manos del Gobernador y del personal nombrado por el Secretario del Interior de los Estados Unidos. También hubiera sido útil que la delegación de los Estados Unidos hubiese distribuido ejemplares del último informe anual del Gobernador de Samoa Americana.

8. El representante de Polonia dijo que el representante de los Estados Unidos, en la declaración que había hecho en la 48a. sesión, había afirmado que su Gobierno estaba tratando de crear una economía sólida en Samoa Americana y Guam, y había citado varios ejemplos de poca importancia para ilustrar el progreso político y social en esos Territorios. Sin embargo, no había mencionado que la anterior economía agrícola de Guam se había transformado en un servicio auxiliar de la base militar, razón principal del interés del Gobierno de los Estados Unidos en la isla. Podía afirmarse, en efecto, que la subordinación de las actividades económicas a los objetivos militaristas había dejado a la economía en una situación peor que la que había originariamente. La historia reciente mostraba que tales bases solían usarse contra los pueblos que luchan por su libertad; así había ocurrido en el caso del Congo y así ocurría en el caso de Viet-Nam.

9. Para completar el proceso de descolonización, todos los Estados Miembros debían dar cumplimiento a las obligaciones que les imponía la Carta y nada debía impedir el examen de las violaciones de la soberanía de una nación.

10. El representante de los Estados Unidos de América declaró que el representante de Polonia, al introducir una referencia a Viet-Nam se había apartado considerablemente del tema de los Territorios bajo administración de los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían tratado de lograr que el Consejo de Seguridad celebrara un debate sobre Viet-Nam y estaban dispuestos a examinar la cuestión en cualquier momento, pero su delegación dudaba de que el Subcomité deseara debatirla en la presente reunión.

11. Afirmó que no eran los Estados Unidos los agresores en Viet-Nam, y que, durante varios decenios, la base militar de Guam se había utilizado para la defensa de los Estados Unidos y de los países vecinos, y no para otros fines. Añadió que a su delegación le sorprendía que acontecimientos tales como la próxima elección del Gobernador de Guam por los habitantes de la isla y la reunión de una convención constitucional en Samoa Americana se consideraran ejemplos de progresos constitucionales de poca importancia.

12. El representante del Irak hizo alusión a la Conferencia celebrada por los Estados Unidos y los Gobiernos de los Territorios algunas semanas antes, en las que los gobernadores habían apoyado la política de los Estados Unidos en Viet-Nam. El orador dudaba de que fuera de la competencia de los administradores de los Territorios en fideicomiso de los Estados Unidos apoyar la política de este país en Viet-Nam, dado que habían sido designados por el Gobierno de los Estados Unidos y no podían hablar en nombre del pueblo de esos Territorios.

13. El representante de Polonia, haciendo uso de su derecho de respuesta, observó que, aunque el representante de los Estados Unidos hubiera protestado por su alusión a Viet-Nam, no podía culparse a nadie más que a los propios Estados Unidos por el hecho de que hubiera bases militares en ese Territorio. En opinión de la delegación de Polonia, la relación existente entre Guam y la guerra de Viet-Nam era muy clara.

14. El representante de los Estados Unidos de América dijo que no consideraba extraña la postura atribuida al Gobernador de Guam y que, posiblemente, éste pensó que podía manifestar libremente sus opiniones sobre los asuntos de que se ocupaba la Conferencia.

15. El representante de Chile preguntó si el representante de los Estados Unidos podía proporcionar información adicional acerca del nuevo proyecto de constitución para Samoa Americana, la composición de la convención constituyente que se reuniría a fines de 1966 para aprobarlo y el papel que desempeñaban los habitantes autóctonos en la evolución política del Territorio. Tal información sería de fundamental importancia pues permitiría que el Subcomité estimara la madurez política alcanzada por los habitantes de la isla, y el grado de autonomía que les concedería la Potencia Administradora.

16. El orador pidió al representante de los Estados Unidos que explicara cuáles serían los verdaderos poderes del Gobernador de Guam dentro del futuro marco constitucional, si, como se proponía entonces, fuese elegido por el pueblo del Territorio. Al Subcomité le interesaría recibir información más concreta sobre la participación del pueblo de Guam en los asuntos políticos y administrativos. Era importante que los habitantes autóctonos, que constituían más de las tres cuartas partes de la población, ejercieran sus derechos a la libre determinación e independencia plenas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

17. El representante de Chile expresó su agradecimiento por la información que ya había brindado el representante de los Estados Unidos sobre el progreso económico, social y político registrado en Samoa Americana y en Guam. Aunque todavía había enormes dificultades que superar en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, existía un creciente sentido de identidad y unidad nacionales entre el pueblo y sus representantes en el Congreso de Micronesia. El orador añadió que no dudaba de que el pueblo de Micronesia continuaría avanzando hacia la libre determinación e independencia plenas.

18. El representante de Polonia declaró que las medidas tomadas por los Estados Unidos, como Potencia Administradora del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, eran insuficientes para lograr el rápido desarrollo constitucional, económico y social de Micronesia: el avance del Territorio hacia la libre determinación era tan lento, que suscitaba serias dudas sobre la sinceridad y el empeño de los Estados Unidos en cumplir las obligaciones que les incumbían en virtud del régimen de administración fiduciaria. Incluso en el campo de la educación, por ejemplo, donde la Potencia Administradora acababa de intensificar sus esfuerzos, los progresos habían sido relativamente limitados y lentos. Además, aunque se había consolidado la estructura política y social del Territorio, los poderes de libre determinación de los órganos que acababan de crearse eran mínimos. El Alto Comisionado de los Estados Unidos tenía aún autoridad ejecutiva y administrativa excesivas si se las comparaba con las del Congreso de Micronesia, que ni siquiera controlaba el presupuesto del Territorio. En tales circunstancias, Micronesia parecía condenada, por muchos años aún, a la dependencia política.

19. El orador pidió encarecidamente a la Potencia Administradora que acelerase el proceso de transferencia de poderes al Territorio, de conformidad con la resolución 1514 (XV), y venciera su aparente renuencia a suministrarle suficiente asistencia financiera y técnica, con objeto de preparar a los habitantes para la libre determinación y la soberanía. La Potencia Administradora debía guiarse por los intereses supremos del pueblo y no por el valor estratégico de las islas.

20. El representante de Australia subrayó que el problema del desarrollo económico y social de todas las Islas del Pacífico, salvo Nueva Guinea, era diferente del de otros territorios dependientes, porque aquéllas constituían minúsculas y aisladas masas de tierra, dispersas en una inmensa superficie oceánica de unos 3 millones de millas cuadradas. La última Misión Visitadora de las Naciones Unidas a las Islas del Pacífico reconoció esa realidad fundamental, que debe tenerse presente al considerar las formas de la independencia que se ha de conceder a los habitantes.

21. El acontecimiento político más importante del Territorio en fideicomiso había sido la elección, por sufragio universal, de un Congreso verdaderamente representativo de Micronesia. Aunque la Autoridad Administradora y el pueblo del Territorio tenían aún que elaborar los detalles sobre los poderes de tal organismo, no podría impugnarse la prudencia de esa decisión. También merecía encomio el empeño de la Autoridad Administradora por acelerar el progreso económico y educativo: el Congreso de los Estados Unidos tenía en consideración un subsidio de 300 millones de dólares para que el Territorio lo invirtiera en bienes de desarrollo y en un programa quinquenal de operaciones, y además, la posibilidad de recurrir al Cuerpo de Paz para hacer frente a la escasez de maestros y a otras deficiencias en el programa de enseñanza.

22. Las medidas positivas que la Autoridad Administradora tomó en Guam reflejan, asimismo, la interpretación correcta de las obligaciones que le incumben para llevar al Territorio hacia la libre determinación plena. El proyecto de ley presentado al Congreso de los Estados Unidos, por el que se establece la elección directa del Gobernador por el pueblo de Guam, fue aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado para la aprobación definitiva. En cuanto a la propuesta de crear un comité de reforma constitucional, en octubre de 1966 se ha de convocar a una Convención Constituyente con objeto de examinar las recomendaciones del Comité en cuanto a la modificación del régimen político y legislativo. Con fines de desarrollo económico, en la *Guam Rehabilitation Act* quedó consignada ya una partida de 29.300.000 dólares, de una proyectada suma de 45 millones de dólares, y se concedieron amplios poderes al Organismo de Desarrollo Económico. En vista de estas importantes medidas para fomentar el desarrollo equilibrado de la Isla, la delegación de Australia estaba a la expectativa de otros rápidos progresos en Guam.

23. En Samoa Americana no había problemas especiales que pudieran suscitar preocupación indebida a las Naciones Unidas. Lo cierto es que, como informó el diario *The New York Times* del 24 de agosto, la "próspera Samoa" aparecía expuesta como "vitrina del Pacífico". Los habitantes del Territorio estaban satisfechos de la situación reinante y no había un movimiento de unión con Samoa Occidental independiente. Cabría recordar, además, que el Congreso de los Estados Unidos tardó unos 25 años en ratificar la cesión voluntaria de la Isla, que los jefes indígenas de otrora hicieron a los Estados Unidos, lo cual es indicio de que la posesión de Guam no fue consecuencia de un "arrebato" de territorio. Desde que el órgano legislativo de Samoa ratificó la Constitución de 1960, Samoa Americana tenía un Congreso, formado por dos cámaras, con el cual se reconocía todo el alcance del tradicional régimen de jefatura o *matai* y, al mismo tiempo, se implantaban conceptos modernos y democráticos de gobierno. Evidentemente, los habitantes de la Isla sabían lo que querían y conciliaban adecuadamente los intereses tradicionales y modernos. En estas circunstancias, sería imprudente forzar el paso de su adelanto político.

24. El representante de Sierra Leona coincidió con la opinión de que, por su ubicación geográfica y su reducida superficie, las islas de que se trata se diferencian y apartan de la mayoría de los otros territorios dependientes, y de que la viabilidad económica de aquéllas presentaba un problema complejo. Además, dado que los habitantes de Guam son ciudadanos de los Estados Unidos con derecho de voto a los 18 años de edad, que los nacionales de los Estados Unidos naturales de Samoa tienen derecho de voto a los 20 años de edad y que los habitantes de las Islas del Pacífico están bajo la tutela de los Estados Unidos, sin que para ellos se establezca edad de votar, parecía que el Gobierno de los Estados Unidos no aplicaba la misma pauta a todos. El orador manifestó que celebraría que se le aclarase ese punto. Asimismo, en tanto que Guam tenía por lo menos dos partidos políticos, uno de ellos vinculado con el principal partido político de los Estados Unidos y empeñado en que Guam se incorporara a los Estados Unidos como quincuagésimo primer Estado, el Comité no tenía información respecto a la organización de partidos políticos en Samoa Americana ni en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Aunque los esfuerzos de la Potencia Administradora por estimular la economía de Guam mediante el de-

sarrollo del turismo fueran benéficos, la Isla dependía todavía mayormente de las ventajas económicas que resultaban de su empleo como base militar. El orador esperaba que la Potencia administradora no orientaría sus esfuerzos hacia el desarrollo de los recursos agrícolas e industriales de Guam. Los Estados Unidos también debían procurar la formación del personal calificado para la actividad técnica, administrativa y económica, que se requería para el desarrollo de los tres Territorios.

25. A pesar de los inconfundibles signos de progreso económico y social, los territorios bajo administración de los Estados Unidos sólo avanzaban muy lentamente hacia la libre determinación y la independencia. Aunque los consejos locales de gobierno y el Congreso de Micronesia eran órganos representativos, no ejercían un control eficaz sobre la legislación: los Estados Unidos, por intermedio del Gobernador o de la Administración, se reservaban la facultad de veto. El orador instó pues a los Estados Unidos a que acelerara el desarrollo político y constitucional de las Islas de manera que pudieran alcanzar rápidamente las metas señaladas por la resolución 1514 (XV). La Misión Visitadora de las Naciones Unidas que había de ir al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico en febrero de 1967, debería ayudar a los habitantes a conocer su derecho a la libre determinación e independencia, informarles de las diversas posibilidades políticas que tienen, entre ellas la de mantener su vinculación con la antigua Autoridad Administradora, y proporcionar a los Estados Miembros información concreta que les permita determinar con mayor exactitud las necesidades de los habitantes de esas Islas.

26. El representante de los Estados Unidos de América remitió a los miembros del Subcomité al reciente informe de la Autoridad Administradora al Consejo de Administración Fiduciaria, que contenía información detallada sobre los acontecimientos económicos y políticos del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Añadió que se esperaba que el amplio estudio económico del Territorio realizado recientemente ayudaría en la formulación de pautas para el futuro desarrollo económico, y la administración de los Estados Unidos había aumentado considerablemente las cantidades solicitadas para el presupuesto de 1966. Declaró que el Congreso de Micronesia, que llevaba dos años de existencia, estaba funcionando bien y sin duda desempeñaría un papel apropiado al trazar el futuro desarrollo constitucional del Territorio.

27. En el informe económico sobre Guam, preparado recientemente con el patrocinio de una Comisión territorial y federal conjunta y presentado al Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1966, se recomendó el desarrollo de ciertos sectores importantes para consolidar y diversificar la economía de Guam: el establecimiento de industrias, con objeto de exportar a los Estados Unidos artículos sujetos a altos aranceles, montados o producidos localmente; la sustitución, en el mercado interno, de los artículos importados por artículos producidos en la localidad, especialmente productos agrícolas y el desarrollo del turismo. Ya se habían tomado medidas en todos esos aspectos. En 1965 se inauguró el primer establecimiento para el armado de relojes, se duplicaron las cifras de la producción agrícola y en el año fiscal de 1965 llegó a Guam el primer barco en travesía de recreo, con 1.300 pasajeros. Además, existía el proyecto de establecer un gran matadero para reducir el volumen de carne importada, y el Organismo de Desarrollo Económico, recién creado por el órgano legislativo de Guam, estaba discutiendo con inversionistas del exterior la construcción de una central para la elaboración del trigo a fin de fomentar la venta en el Lejano Oriente de trigo procedente de los Estados Unidos. Se estaban ejecutando otros planes para la construcción de una terminal aérea, por valor de 1 millón de dólares, y la de un posible nuevo puerto comercial y se estaba dando prioridad al aumento del número de hoteles en la Isla. Si bien carecía de recursos industriales locales, Guam tenía grandes posibilidades como centro de elaboración y servicios.

28. El proyecto de ley sometido al Senado de los Estados Unidos y que está encaminado a la elección directa del Gobernador de Guam, constituía un paso importante hacia la libre determinación del pueblo de la Isla. Un gobernador de Guam, elegido por sufragio universal, sería el jefe ejecutivo del Te-

ritorio con atribuciones ejecutivas completas, y sería responsable de hacer cumplir las leyes de Guam y las de los Estados Unidos que fueran aplicables en Guam. Además, la creciente participación de los habitantes de Guam en la administración de la Isla había sido confirmada por el informe del Gobernador relativo al ejercicio económico de 1965-1966, en que se declara que de los 2.669 miembros efectivos del personal ejecutivo del Gobierno de Guam, 2.227 son autóctonos. De los restantes, 224 son ciudadanos de los Estados Unidos procedentes de otras partes. El propio Gobernador es un autóctono.

29. El comité encargado de estudiar la reforma constitucional de Samoa Americana propuso, entre otras cosas, que se ampliaran los poderes de la legislatura en materia presupuestaria. Sugirió además que se modificaran los requisitos para ser miembro de la Legislatura, a fin de que ésta fuera más ampliamente representativa, que se prolongara la duración máxima del período de sesiones anual legislativo y que se redujera el número de días concedidos al Gobernador para tomar medidas respecto a los proyectos legislativos. Recomendó que se suprimiera la disposición constitucional por la que se faculta al Gobernador a promulgar leyes que él califique de "urgentes", cuando el órgano legislativo no las sancione, así como la disposición por la que se limita el número de departamentos ejecutivos del Gobierno de Samoa y se prohíbe el establecimiento de nuevos organismos sin aprobación previa del Secretario del Interior. Aún no se habían tomado medidas respecto a la composición de la Convención Constituyente que ha de estudiar esas propuestas en octubre, pero probablemente se incluirá al órgano legislativo y a los representantes locales.

Conclusiones del Subcomité

30. a) El Subcomité estima que, aunque la Potencia Administradora ha adoptado algunas medidas positivas, el progreso hacia la libre determinación y autonomía plenas no es adecuado.

b) La Potencia Administradora conserva todavía poderes considerables de fiscalización en las esferas ejecutiva y legislativa, restringiendo en esa forma el ejercicio del gobierno propio por la población de los Territorios. Las instituciones políticas y el mecanismo ejecutivo no son plenamente representativos del pueblo.

c) El Subcomité toma nota de los diversos planes anunciados por la Potencia Administradora para robustecer la economía de los Territorios. El Subcomité estima que la Potencia

Administradora debiera intensificar sus esfuerzos para explotar y desarrollar los recursos propios de los Territorios. El Subcomité está enterado particularmente de la dependencia en que se encuentra la economía de Guam respecto a las actividades militares y de otros órdenes del Gobierno de los Estados Unidos.

d) El Subcomité toma nota de que se espera que en un futuro próximo el Congreso de los Estados Unidos promulgue la legislación que dispone la elección directa del Gobernador de Guam. También toma nota el Subcomité de que en octubre de 1966 se ha de convocar una convención constituyente en Samoa Americana para que redacte una nueva constitución del Territorio. A pesar de estos hechos, el Subcomité toma nota de que no se ha elaborado un programa de medidas eficaces para la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Recomendaciones del Subcomité

31. a) El Subcomité reafirma el derecho inalienable de la población de Samoa Americana, Guam y del Territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico a la libre determinación y la independencia de conformidad con la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

b) La Potencia Administradora debe acelerar el desarrollo político ulterior de los Territorios mediante la ampliación de las funciones y poderes de las legislaturas y el traspaso de la autoridad ejecutiva a la población autóctona.

c) El Subcomité insta a la Potencia Administradora a que facilite más el crecimiento económico de los Territorios, mediante el pleno desarrollo de su potencial industrial y agrícola y a que — especialmente en lo que se refiere a Guam — aplique con la mayor rapidez posible sus planes de diversificación de la economía. La asistencia de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados podría ser utilizada con máxima eficacia a este respecto.

d) Se pide a la Potencia Administradora que amplíe los servicios de enseñanza y formación profesional para la población de los Territorios.

e) La visita a los Territorios por el Comité Especial es necesaria y sería sumamente útil, ya que, además de familiarizar a los Estados Miembros con las necesidades y aspiraciones de la población, incrementaría también en las poblaciones la conciencia de los derechos que las Naciones Unidas les han garantizado.

CAPÍTULO XIX*

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NAURU, PAPUA Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NUEVA GUINEA, E ISLAS COCOS (KEELING)

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

1. Tras examinar en noviembre de 1964 la situación en el Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, e Islas Cocos (Keeling), el Comité Especial recomendó que se permitiera a las poblaciones de esos Territorios expresar sus deseos de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General mediante un procedimiento democrático bien determinado y bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Recomendó además que convendría que se enviara una misión visitadora a esos Territorios a fin de evaluar el ambiente político y las aspiraciones populares y que se adoptaran las medidas necesarias para organizar esa visita en con-

sulta con la Potencia Administradora (A/5800/Rev.1¹, cap. XIX, párrs. 144 a 155).

2. Respecto de Nauru, el Comité estimó que la aplicación de la resolución 1514 (XV) y el reasentamiento de los nauruanos eran dos cuestiones distintas que habían de resolverse independientemente, debiéndose dar preferencia a la primera según deseaban los nauruanos. Pidió a la Autoridad Administradora que prestara entera asistencia para el futuro reasentamiento de los nauruanos, conforme a sus deseos. Recomendó que se diera a éstos el pleno control sobre sus recursos económicos naturales y que la Autoridad Administradora prosiguiera las negociaciones con tal fin.

3. Respecto de Papua y del Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, el Comité Especial pidió a la

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoventa período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

Potencia Administradora que adoptara urgentemente medidas para aplicar las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y que, en consulta con la Asamblea Legislativa, dictara nuevas medidas constitucionales con objeto de abolir los puestos especiales y reservados en ésta y aplicar dicha resolución. Recomendó que se prestara inmediatamente atención a la disparidad existente en los salarios de la población indígena a fin de suprimir esa anomalía. Recomendó que se reforzaran los consejos de gobierno local para dar a la población la posibilidad de ejercer el gobierno propio en el plano municipal. Estimó que se debían continuar a ritmo acelerado los esfuerzos en las esferas de la economía y de la enseñanza.

4. Tras haber estudiado los capítulos de los informes del Comité Especial relativos a Nauru (A/5800/Rev.1, cap. XIX; y A/6000/Rev.1², cap. XVIII) y el informe del Consejo de Administración Fiduciaria³, la Asamblea General aprobó en su vigésimo período de sesiones la resolución 2111 (XX), de 21 de diciembre de 1965. En esa resolución la Asamblea hacía suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial y encarecía a la Autoridad Administradora que adoptara inmediatamente medidas para dar cumplimiento a la propuesta de los representantes del pueblo nauruano acerca del establecimiento de un Consejo Legislativo antes del 31 de enero de 1966. La Asamblea pedía a la Autoridad Administradora que fijara la fecha más próxima posible, pero a más tardar al 31 de enero de 1968, para la independencia del pueblo nauruano, en conformidad con los deseos de éste. Pedía además que la Autoridad Administradora adoptara inmediatamente medidas para rehabilitar la isla de Nauru y hacerla habitable para su pueblo como nación soberana. Pedía a la Autoridad Administradora que informara al Consejo de Administración Fiduciaria en su 33º período de sesiones acerca de la aplicación de la resolución.

5. También en el vigésimo período de sesiones la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial relativos a Papua y al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea (*ibid.*) y el informe del Consejo de Administración Fiduciaria³, aprobó la resolución 2112 (XX), de 21 de diciembre de 1965. En esta resolución la Asamblea hacía suyas las recomendaciones y conclusiones del Comité Especial y encarecía a la Autoridad Administradora que diera pleno cumplimiento a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y, con ese fin, que fijara una fecha cercana para la independencia, de conformidad con los deseos libremente expresados de la población. Pedía a la Autoridad Administradora que informara de la aplicación de la resolución al Consejo de Administración Fiduciaria en su 33º período de sesiones y al Comité Especial. Pedía además al Consejo de Administración Fiduciaria y al Comité Especial que le informaran en su vigésimo primer período de sesiones.

6. En ese mismo período de sesiones, la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial referentes a las Islas Cocos (Keeling) (*ibid.*), aprobó la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965, haciendo suyas las conclusiones y recomendaciones que en ellos figuraban y pidiendo a la Potencia Administradora que pusiera en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la

Asamblea General. La Asamblea pidió a la Potencia Administradora que permitiera a las misiones de las Naciones Unidas visitar el Territorio y les ofreciera toda su cooperación y asistencia. Por último, pidió al Comité Especial que examinara la situación de ese Territorio e informara a la Asamblea en el vigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de esa resolución.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS

Introducción

7. La información sobre el Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, e Islas Cocos (Keeling) ya figura en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo (A/5800/Rev.1, cap. XIX; y A/6000/Rev.1, cap. XVIII). Seguidamente se proporcionan algunos datos suplementarios⁴.

1. TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NAURU

Generalidades

8. La población total de Nauru al 30 de junio de 1965 era de 5.561 habitantes, de los cuales 2.734 nauruanos, 1.481 naturales de otras islas del Pacífico, 900 chinos y 446 europeos.

El porvenir de la comunidad nauruana

9. La cuestión del porvenir de la comunidad nauruana ha constituido un tema de especial preocupación durante algún tiempo debido a que los depósitos de fosfato del Territorio quedarán agotados dentro de unos 30 años. Se han hecho estudios de la Isla de Curtis, la cual ha sido propuesta como futura morada de los nauruanos. En su informe correspondiente a 1964-1965, la Autoridad Administradora hace constar que ha cumplido las siguientes peticiones de los nauruanos: no llevar adelante la propuesta de adquirir la Isla de Curtis como futuro lugar de asentamiento y crear un comité técnico independiente encargado de estudiar la posibilidad de rehabilitar las tierras agotadas por la explotación de fosfato. El comité se reunió en enero de 1966 y el 8 de junio presentó su informe al Ministro de Territorios y al Consejo Legislativo de Nauru. El informe no se ha hecho público todavía.

Evolución política y constitucional

10. Anteriormente no había en Nauru ningún consejo ejecutivo o legislativo. Conforme a un acuerdo concertado a raíz de las conversaciones sostenidas con representantes del pueblo nauruano en junio de 1965,

⁴La información sobre los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea que aquí figura procede de la documentación presentada al Consejo de Administración Fiduciaria en su 33º período de sesiones, en particular los informes de la Autoridad Administradora correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio de 1964 y el 30 de junio de 1965 (A/6363 y A/6364). La información sobre Papua procede de los informes publicados y de la información transmitida por Australia el 5 de agosto de 1966 al Secretario General en cumplimiento del inciso e del Artículo 73 de la Carta y correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1965. La información sobre las Islas Cocos (Keeling) fue transmitida por Australia el 2 de febrero de 1965 y corresponde al ejercicio terminado el 30 de junio de 1964.

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Suplemento No. 4 (A/6004).

se dispuso lo pertinente en la Ley sobre Nauru de 1965 para el establecimiento de un Consejo Ejecutivo y de un Consejo Legislativo⁵. El Consejo Legislativo, con una mayoría nauruana electiva, se inauguró en enero de 1966. Además de los nueve miembros nauruanos electivos, el Consejo tenía cinco miembros designados oficialmente. En su segunda sesión, el Consejo Legislativo nombró un comité especial integrado por cinco de sus miembros electos encargado de "investigar los medios más apropiados por los cuales el pueblo nauruano puede lograr la completa independencia para enero de 1968, y de informar al respecto".

11. En el 33º período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Administradora expresó la opinión de que las conversaciones sobre la futura evolución política debían quedar en suspenso durante dos o tres años después de establecidos los Consejos Legislativo y Ejecutivo. Por su parte, el Jefe Principal de Nauru informó al Consejo de Administración Fiduciaria que no creía que hubiera ninguna dificultad en celebrar las conversaciones en 1967.

Condiciones económicas

12. El fosfato constituye la única exportación del Territorio. Los Comisionados Británicos del Fosfato se encargan de la dirección y administración de esa industria, con inclusión de su extracción y exportación.

13. En su informe correspondiente a 1964-1965 (A/6363), la Autoridad Administradora manifestaba que la producción de fosfato entregada durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 1965 ascendía a 1.688.998 toneladas, contra 1.653.090 toneladas en 1963-1964. El valor para el mismo período ascendía a 4.771.419 libras, contra 4.422.016 libras en 1963-1964. Se agregaba en el informe que, con un ritmo de extracción de unos 2 millones de toneladas por año, se calculaba que los yacimientos durarían aproximadamente 30 años.

14. El total de las importaciones, procedentes principalmente de Australia, se valoraba en 2.297.899 libras en 1964-1965, contra 5.604.100 en 1963-1964.

15. Los ingresos fiscales del ejercicio 1964-1965 ascendieron a 650.444 libras, de los cuales los Comisionados Británicos del Fosfato suministraron 607.594 libras. El total de gastos fue de 770.095 libras.

16. En su informe correspondiente a 1964-1965, la Autoridad Administradora hacía constar que había convenido con los nauruanos en examinar en el primer semestre de 1966 las futuras disposiciones relativas a la explotación de la industria minera. En su 33º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria tuvo noticia de que esas conversaciones se habían iniciado en junio y, tras un intercambio de opiniones, habían sido aplazadas hasta octubre o noviembre de 1966. El Consejo fue informado por el Jefe Principal de Nauru que los nauruanos aspiraban a obtener la propiedad de la industria y no podían aceptar una participación del 50% en virtud de un acuerdo de asociación hasta que se extinguiera la industria fosfatera de Nauru. Estimaban que los Comisionados Británicos del Fosfato debían permanecer en la isla como agentes directores y estaban dispuestos a pagarles una remuneración justa.

⁵ Para detalles de las disposiciones de la Ley sobre Nauru, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 4* (A/6304), párrs. 356 a 367.

Los nauruanos estaban también dispuestos a adquirir el equipo que los Comisionados poseían en Nauru, pagándoles el precio debido. Estas cuestiones se examinarían con más detalle en una conferencia en Canberra.

17. El Jefe Principal manifestó también que el pueblo nauruano impugnaba el punto de vista de la Autoridad Administradora acerca de que los yacimientos eran propiedad de los Comisionados Británicos del Fosfato e insistió en que los nauruanos eran los dueños del fosfato y no reconocían el derecho de los Comisionados.

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria en 1966

18. El Consejo de Administración Fiduciaria, durante su 33º período de sesiones, celebrado en julio de 1966, dio cima al examen del informe anual de la Autoridad Administradora sobre Nauru correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1964 y el 30 de junio de 1965 (A/6363).

19. En carta de 25 de julio de 1966 (A/AC.109/191), el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria comunicó al Presidente del Comité Especial que el Consejo había aprobado un informe sobre el Territorio de Nauru para su presentación a la Asamblea General (véase A/6304). Además de las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria y de las observaciones hechas por sus miembros a título individual, el informe contiene información detallada sobre la situación política, económica, social y educativa.

2. PAPUA Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NUEVA GUINEA

Generalidades

20. Al 30 de junio de 1965, el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y el Territorio vecino de Papua tenían una población autóctona censada de 2.092.807 habitantes, y unos 25.110 habitantes más, según cálculos. El total de los habitantes no autóctonos se estimó en 31.486.

Evolución política y constitucional

21. Papua y el Territorio en fideicomiso son administrados conjuntamente y la capital administrativa es Port Moresby. El órgano legislativo de ambos Territorios, la Asamblea Legislativa, se compone de 54 miembros elegidos por un colegio electoral único mediante sufragio universal de los adultos; los 10 restantes son miembros funcionarios. De los escaños electivos, 44 pueden ser ocupados por candidatos de cualquier raza, y 10 están especialmente reservados a los no autóctonos.

22. En noviembre de 1965 y junio de 1966, presentó sus informes provisionales el Comité Especial que había sido nombrado en 1965 por la Asamblea Legislativa "para presentar a ésta un conjunto de propuestas constitucionales que sirvieran de guía a la futura evolución constitucional del Territorio". En su 33º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria fue informado de que el Comité, cuyo presidente es miembro autóctono elegido, había viajado mucho por el Territorio para recoger las opiniones de un gran sector de la población, que su mandato era amplio y que es-

taba encargado de estudiar no sólo la composición de la Asamblea Legislativa, sino también las propuestas sobre la evolución futura constitucional del Territorio. También fue informado de que, a fin de satisfacer la posible necesidad de reformas de la *Papua and New Guinea Act*, el informe del Comité sobre la composición de la Asamblea Legislativa habría de presentarse a ésta en agosto de 1966.

23. La Autoridad Administradora manifiesta que la ampliación del sistema de consejos de administración local ha progresado bastante desde julio de 1965, y que con la promulgación de la Ordenanza de Administración Local de enero de 1966, los consejos de administración local gozan de más amplios poderes y funciones. El ejercicio del control gubernativo central por funcionarios locales ha sido suprimido, al pasar a un Comisionado de Administración Local. Los presupuestos de los consejos no están ahora sujetos a aprobación, sino meramente a una verificación de que los gastos propuestos van a quedar probablemente cubiertos con los ingresos.

Condiciones económicas

24. La economía de Papua y del Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea se funda en la producción primaria. La agricultura es la actividad principal, y en 1964-1965 las exportaciones agrícolas representaron el

90% del total de exportaciones de Papua y aproximadamente el 86% de las exportaciones del Territorio en fideicomiso.

25. Las principales exportaciones agrícolas de Papua son la copra y el caucho; las del Territorio en fideicomiso son la copra, el cacao y el café. Se está formando una importante industria maderera basada en los amplios recursos forestales del Territorio en fideicomiso. La minería del oro, aunque hoy en declive, sigue siendo actividad importante. Se está fomentando la industria pecuaria. Las industrias manufactureras son de escasa aunque creciente importancia.

26. Aunque la agricultura de subsistencia sigue siendo la actividad predominante de la población autóctona, aumenta el número de agricultores de Papua y Nueva Guinea que cultivan cosechas de exportación o cosechas comerciales para su venta local. Durante 1964-1965, los agricultores autóctonos produjeron aproximadamente la mitad de la copra y las tres cuartas partes del café que se cultivan en Papua, y sus plantaciones de cocoteros alcanzan hoy un total de unos 947.500 árboles. Los agricultores autóctonos producen actualmente algo más de una cuarta parte de la copra, alrededor de una cuarta parte del cacao y algo menos de la mitad del café que se producen en Nueva Guinea.

27. El siguiente cuadro muestra la hacienda pública de los Territorios:

	1963-1964			1964-1965		
	Papua	Nueva Guinea	Total	Papua	Nueva Guinea	Total
<i>(En millones de libras australianas)</i>						
Ingresos internos	5,24	6,13	11,37	6,51	7,45	13,96
Subsidios de Australia	10,01	15,23	25,24	11,06	16,93	27,99
Ingresos totales	15,25	21,36	36,61	17,57	24,38	41,95
TOTAL de gastos	15,89	22,43	38,52	18,69	26,34	45,03

28. La Autoridad Administradora aportó un subsidio de 68,82 millones de dólares australianos⁶ al presupuesto territorial combinado de 1965-1966. Los gastos en actividades económicas subieron de aproximadamente un 25% en 1963-1964 a un 33% en el presupuesto de 1965-1966. Los ingresos totales para 1965-1966 se calcularon en 102,34 millones de dólares australianos; suma que comprendía las cantidades de 34,2 millones y 6,14 millones de dólares australianos que se esperaban obtener respectivamente de los impuestos locales internos y de empréstitos del Territorio. Del 1° de julio de 1965 al 31 de marzo de 1966, los ingresos fiscales internos en Papua y el Territorio en fideicomiso ascendieron a 23,113 millones de dólares australianos. Los gastos totales para 1965-1966 se estimaron aproximadamente en 102,34 millones de dólares australianos, inclusive 27,6 millones destinados a obras, lo que representa un aumento de 4,7 millones sobre el ejercicio anterior.

29. Las compañías que actúan en Papua y en el Territorio en fideicomiso pagaron unos 4,6 millones de libras aproximadamente en dividendos y 1,5 millones de

libras en impuestos durante 1964-1965 sobre unas utilidades imponibles de 10,4 millones de libras obtenidas en 1963-1964. Las cifras correspondientes del ejercicio anterior fueron 2,5 millones, 1,1 millones y 6,9 millones de libras, respectivamente.

30. Conforme a una recomendación hecha por la misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que visitó los Territorios en 1963, en octubre de 1965 fue nombrado un asesor económico.

31. En noviembre de 1965, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para crear un Banco de Desarrollo cuyo fin principal sería estimular el fomento de la producción primaria y de las empresas industriales o comerciales, en términos y condiciones más generosos que los existentes por conductos bancarios. El Banco será regido y administrado por un Consejo de Administración y entre los doce miembros de éste figurarán representantes de los productores autóctonos.

Condiciones sociales en Papua

Mano de obra

32. Aunque en estos últimos años ha habido continuo aumento del número de autóctonos que tienen empleo remunerado, la proporción de éstos respecto de la

⁶La Autoridad Administradora adoptó el sistema monetario decimal el 14 de febrero de 1966. El nuevo dólar australiano equivale a 10 chelines de la anterior moneda legal, o a 1,12 dólares de los EE. UU.

población masculina adulta autóctona calculada sigue siendo relativamente pequeña (alrededor del 13%). Gran parte de la mano de obra del Territorio continúa realizando trabajos no especializados en las plantaciones o en las ciudades, pero va surgiendo un núcleo de trabajadores más especializados y con mayor experiencia, mucho más capaces que antes de negociar sus propios salarios y condiciones de trabajo.

33. Al 31 de marzo de 1965 había 29.234 autóctonos con empleos remunerados (entre ellos 1.159 miembros de la fuerza de policía, pero sin contar a los miembros de las fuerzas de defensa), contra 25.147 en 31 de marzo de 1964. La industria privada daba empleo a 19.124, de los que 9.839 trabajaban en las plantaciones, frente a 16.270 (de ellos 6.301 trabajadores de plantaciones) en 1964.

Sanidad

34. Los gastos por concepto de servicios sanitarios ascendieron a 1.498.355 libras para el período 1964-1965; los gastos de capital por concepto de obras y servicios, y los de mejora y conservación de instalaciones de hospital y equipo, ascendieron a 709.700 libras. El costo del equipo de hospital y médico fue de 40.865 libras. Las cifras correspondientes durante 1963-1964 fueron 1.344.924 y 694.242 libras. Los consejos de administración local comunicaron un gasto en servicios sanitarios de 22.059 libras al 31 de diciembre de 1964, frente a 13.928 libras en 1963.

35. Las misiones reciben ayuda de la Administración mediante un sistema de subsidios y suministros de medicamentos, materiales y equipo. Los subsidios y el valor monetario de los suministros dieron un total de 47.349 libras para 1964-1965, y los subsidios para construir hospitales de las misiones ascendieron a 15.610 libras, frente a 85.270 y 18.458 libras del período 1963-1964. Los gastos comprobables efectuados por las misiones para servicios médicos sufragados con sus propios fondos fueron de 45.006 libras para 1964-1965; frente a 75.744 en 1963-1964.

Situación de la enseñanza en Papua

36. Al 30 de junio de 1965 había 171 escuelas de la Administración y 668 escuelas de misiones, en tanto que en el año anterior había 169 y 733 respectivamente. La disminución del número de escuelas de misiones obedeció a haberse hecho más rigurosas las normas de instrucción. También el número de alumnos disminuyó durante el mismo período, de 73.523 a 71.506. En el cuadro siguiente consta la matrícula escolar de 1965.

Escuelas	Alumnos autóctonos	Alumnos no autóctonos
Primarias	62.822	1.547
Secundarias	2.825	195
Técnicas	984	—
Normales de maestros	367	38
Correspondencia	2.728	—
TOTAL	69.726	1.780

37. Además de los alumnos en Papua en 1965, 54 estudiantes autóctonos y 584 no autóctonos recibían asistencia educativa en escuelas secundarias australianas.

Nueve papúes cursaban estudios en establecimientos de enseñanza superior de Australia: seis en facultades universitarias de derecho, ciencia agrícola, estudios sociales y letras; uno en una escuela superior de agricultura y dos en una escuela técnica.

38. La comisión nombrada por el Gobierno australiano en 1963 para que informase sobre la educación superior recomendó que se creasen sin tardanza una universidad y un instituto de educación técnica superior. En 1965 se aprobaron la ordenanza de la Universidad de Papua y Nueva Guinea y la ordenanza del Instituto de Educación Técnica Superior, y se efectuaron varios nombramientos para ambos centros docentes. En 1967 comenzarán en la Universidad los primeros cursos de letras y derecho. En febrero de 1966, 58 alumnos han comenzado un curso preparatorio para la Universidad. En 1967 se abrirán las clases del Instituto de Educación Técnica Superior.

39. Los gastos ministeriales de educación subieron de 1.504.000 libras australianas en 1963-1964 a 1.926.000 en 1964-1965, o sea el 10% de los gastos totales gubernamentales. En estas cifras entran los subsidios de 134.000 y 171.000 libras destinados a las misiones para prestarles ayuda en su labor educativa. Además, los gastos de otros departamentos por concepto de educación y formación aumentaron de 312.000 a 492.000 libras, en tanto que los gastos de construcción y equipo descendieron de 646.000 a 324.000 libras. Los gastos hechos por las misiones con sus propios fondos aumentaron de 177.000 en 1963-1964 a 261.000 en 1964-1965.

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria sobre Nueva Guinea en 1966

40. En su 33° período de sesiones, en julio de 1966, el Consejo de Administración Fiduciaria dio cima a su examen del informe anual de la Autoridad Administradora sobre el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea para el período del 1° de julio de 1964 al 30 de junio de 1965 (A/6364).

41. En carta de fecha 25 de julio de 1966 (A/AC.109/191), el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria comunicó al Presidente del Comité Especial que el Consejo había aprobado un informe sobre el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea para su presentación a la Asamblea General (véase A/6304). Además de las recomendaciones y conclusiones del Consejo y de las observaciones hechas por los miembros a título individual, el informe contiene información detallada sobre la situación política, económica, social y educativa del Territorio en fideicomiso y sobre las instituciones comunes a los dos Territorios.

3. ISLAS COCOS (KEELING)

Generalidades

42. Las Islas Cocos (Keeling) son un grupo de pequeñas islas coralinas situadas en el Océano Índico, cuya superficie terrestre total es de cinco millas cuadradas. En 1964 había tres habitadas y la población estaba compuesta por 463 nativos de las Islas Cocos y 200 europeos. Los nativos de las Cocos habitan la Isla de Horne y los europeos viven en las Islas West y Direction.

Acontecimientos políticos

43. No ha habido últimamente cambios administrativos importantes en el Territorio. Un Representante

Oficial, nombrado por el Ministro australiano de Estado para los Territorios, sigue ejerciendo en el Territorio los poderes y funciones que le delega el Ministro o que le han sido conferidos por la ley de 1955-1963 relativa a las Islas Cocos (Keeling). Conforme a las disposiciones actualmente en vigor tiene a su cargo la administración en general, incluidas la enseñanza y la sanidad. En el Territorio no hay cargos electivos.

Condiciones económicas

44. La economía del Territorio se funda en un aeropuerto internacional, una estación cablegráfica y otras instalaciones mantenidas por el Gobierno del Commonwealth y las organizaciones comerciales, y en la producción y exportación de copra cultivada en el Clunies-Ross Estate. Conforme a la concesión otorgada en 1886, la familia Clunies-Ross tiene posesión a perpetuidad de todas las tierras del Territorio que quedan al descubierto en la marea alta. La concesión está sujeta a condiciones que permiten al soberano recuperar cualquier parte de la tierra para determinados propósitos. En una de las islas se cultivan verduras en pequeña cantidad, pero en las otras dos islas habitadas se importan todas las frutas y las verduras consumidas por no disponerse de tierras ni de agua para el cultivo.

45. Los gastos administrativos y los gastos de capital y servicios se financian con fondos que el Gobierno del Commonwealth destina a tal fin. Hay ciertas rentas de origen local por hospitalización y derechos de hospitalización que en 1963-1964 ascendieron a 3.624 libras australianas. Los gastos de ese período fueron de 41.787 libras australianas en total.

Condiciones sociales

46. Los nativos de las Islas Cocos trabajan en el Clunies-Ross Estate, principalmente en la producción de copra y en el mantenimiento de los servicios comunales. La empresa se encarga también de los trabajos de construcción, conservación y reparación para las autoridades y las organizaciones privadas. Los servicios sociales comprenden pensiones superiores al 50% de los salarios para los trabajadores que han llegado a los 65 años de edad, enseñanza y atención médica gratuitas.

47. Los servicios médicos del Territorio están a cargo de un funcionario médico, dos enfermeras y un hospital de cuatro camas. Los europeos deben pagar por la atención médica recibida. El Clunies-Ross Estate costea los servicios que se prestan a los nativos.

Situación de la enseñanza

48. La enseñanza elemental que proporciona el Clunies-Ross Estate en la Isla de Horne para los hijos de sus empleados, consiste en dos o tres años de educación en el idioma vernáculo (malayo). En la Isla West el Gobierno mantiene una escuela primaria para los niños europeos, en la que se sigue el plan de estudios de Australia occidental. En 1964 la matrícula era de treinta y dos alumnos.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

49. En su 469a. sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966, el Comité Especial examinó el informe del Subcomité II sobre el Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva

Guinea, e Islas Cocos (Keeling), informe que aparece como anexo al presente capítulo.

50. El representante de Australia dijo que se estaban discutiendo con los representantes del pueblo de Nauru la totalidad del concepto de independencia y los elementos esenciales de la misma. El asunto era complejo, debido a que la población de Nauru era pequeña y a que dependían de un solo producto, a saber, los fosfatos. La población de la isla había alcanzado un alto grado de prosperidad, pero aumentaba rápidamente y la cuestión de que fuese posible continuar una existencia económica en la isla era motivo de gran preocupación para los habitantes de Nauru y para el Gobierno de Australia. Las tentativas para llegar a un acuerdo sobre otro territorio patrio para los habitantes de Nauru habían resultado hasta ahora infructuosas, pero la posibilidad de su asentamiento en un nuevo territorio no se había desvanecido del todo. El Consejo Legislativo recién acababa de establecerse. Era en vista de todos estos factores que Australia proseguía discutiendo la cuestión de la independencia con los dirigentes nauruanos.

51. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que un examen de la situación de los territorios en fideicomiso administrados por Australia mostraba que la Autoridad Administradora no había hecho prácticamente nada por aplicar las resoluciones que la Asamblea General aprobara en su vigésimo período de sesiones, en las que se hacían recomendaciones precisas respecto al progreso de la población de esos territorios hacia la libre determinación y la independencia. Tal como podía apreciarse en el informe del Subcomité II (véase anexo) y en los documentos de trabajo de la Secretaría (véanse párrs. 7 a 48 *supra*), se habían realizado pocos progresos en el terreno político desde la última vez que el Comité Especial examinó las condiciones existentes en los territorios. Su delegación compartía la conclusión del Subcomité de que el progreso hacia la aplicación de la declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General había sido lento. Por lo tanto, la delegación de la Unión Soviética apoyaba la enmienda propuesta por el representante de Tanzania al inciso f) del párrafo 29 del informe del Subcomité.

52. En los demás territorios administrados por Australia, el progreso hacia la libre determinación también había sido mínimo y Australia se negaba a establecer un calendario definitivo para la concesión de la independencia a dichos países. En realidad, el Ministro australiano de Territorios había declarado a comienzos de este año que Australia no tenía el propósito de salir de Papua y Nueva Guinea. La delegación de la Unión Soviética compartía la opinión expresada por el representante de Sierra Leona de que la Potencia Administradora no parecía estar realizando intento alguno de preparar a las Islas Cocos para la libre determinación y posible independencia.

53. La situación en el campo económico era igualmente desalentadora. Sólo se ampliaban las actividades que rendían utilidades enormes al capital extranjero, a saber, la copra, el cacao, el café, la madera y los fosfatos. Como resultado de ello, los territorios se veían obligados a importar los artículos de primera necesidad. Los monopolios extranjeros ocupaban en los territorios una posición de predominio y los recursos humanos y naturales de éstos eran explotados despiadadamente.

54. El representante de Australia había informado al Comité Especial de que la economía de Nauru depen-

día en alto grado de la explotación de los yacimientos de fosfato, y de que éstos se estaban agotando. Sin embargo, no había dicho que esos recursos estaban siendo saqueados por Potencias extranjeras y principalmente por los Comisionados Británicos del Fosfato, que pagaban a la población de Nauru 2 dólares australianos por tonelada, mientras que el fosfato enriquecido se vendía en el mercado mundial a 40 dólares la tonelada. Se sabía que en 1964-1965 las compañías que operaban en los Territorios de Papua y Nueva Guinea solamente, habían obtenido ingresos por un total de 10.400.000 libras.

55. Los representantes australianos en diversos órganos de las Naciones Unidas citaban cifras impresionantes como pruebas de los esfuerzos que Australia estaba realizando para desarrollar los territorios bajo su administración. Sin embargo, el análisis mostraba que en el Territorio de Nueva Guinea la cantidad destinada al desarrollo del Territorio ascendía sólo a 15 dólares per cápita.

56. La información proporcionada en el informe indicaba que la Autoridad Administradora no realizaba esfuerzos suficientes para proporcionar servicios de enseñanza, y en particular formación técnica superior, a la población de los territorios. Se sabía que en los territorios existía la discriminación racial, particularmente en Nueva Guinea y Papua. La Autoridad Administradora alegaba que estaba haciendo todo lo posible por eliminar esa discriminación, pero las leyes vigentes en Nueva Guinea y Papua probaban que la propia Autoridad Administradora era hasta cierto punto responsable de que existiese la discriminación racial en esos países. Bastaba recordar que la ley de 1964 referente a los funcionarios públicos había establecido una escala de sueldos en virtud de la cual los australianos percibían una remuneración más elevada que los habitantes autóctonos.

57. La delegación de la Unión Soviética consideraba necesario señalar a la atención el hecho de que Australia estaba utilizando los territorios en fideicomiso bajo su administración para construir bases militares, violando así la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General. En Nueva Guinea existían varios aeropuertos que servían de bases a los bombarderos de la Fuerza Aérea Australiana. Según informes periodísticos, el cuartel general de la división para Papua y Nueva Guinea de las fuerzas navales australianas estaba situado en la isla de Manus. En el mismo artículo periodístico se mencionaba la posibilidad de que la base fuese también utilizada por los Estados Unidos de América. La delegación de la Unión Soviética ya había señalado a la atención el hecho de que algunas bases establecidas por Australia en territorios en fideicomiso eran utilizadas como lugares de tránsito para las tropas que se enviaban a Viet-Nam para aplastar el movimiento de liberación nacional en el Asia sudoriental.

58. El representante de Australia, haciendo uso del derecho de respuesta, dijo que no había bases militares en los territorios en fideicomiso que administraba su Gobierno. Sin embargo, había ciertas instalaciones de defensa que su país había construido en parte como resultado de su experiencia en la segunda guerra mundial, que le había ocasionado 15.000 bajas entre los naturales de Papua y Nueva Guinea. Además, en virtud del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, Australia era responsable de la protección de los habitantes de los

territorios que administraba. El representante de Australia subrayó que ninguno de los aeropuertos de Nueva Guinea había sido jamás usado para apoyar las operaciones de su país en Viet-Nam.

59. Con respecto a la observación del representante de la URSS, de que el progreso hacia la libre determinación había sido mínimo, el orador señaló que existía un Parlamento en Nueva Guinea elegido a base de una "lista electoral general", o sea un voto por persona (sin distinción por motivos de raza, religión o color), que contaba con una mayoría autóctona importante. Incluso en el curso de sus trabajos parlamentarios, esta Asamblea altamente representativa estaba revisando su propia forma y tratando de robustecer sus métodos de trabajo mediante la labor de su propio comité de reforma constitucional en el que había una fuerte representación de la mayoría autóctona elegida. Dicho comité debía presentar propuestas acerca de la futura evolución constitucional (que debía seguir a una serie de avances constitucionales anteriores, realizados conforme a la teoría de desarrollo ordenado, progresivo y constitucional que propiciaba el Gobierno australiano). Añadió que confiaba poder informar en breve a los órganos competentes de las Naciones Unidas (posiblemente antes del final del actual período de sesiones de la Asamblea) sobre las recomendaciones de dicho comité tal como estaban entonces, y sobre la acción correspondiente propuesta por el Gobierno australiano. Pero este Parlamento, elegido a base del sufragio universal y con su mayoría autóctona, no era más que la culminación de un desarrollo político profundamente arraigado en la tierra y entre la gente, mediante la amplia red de consejos de administración local que cubría todo el Territorio. Existían 123 consejos de este tipo en los Territorios de Papua y Nueva Guinea, que representaban aproximadamente a 1.500.000 personas, quienes elegían a los miembros de los consejos a base del sufragio de adultos. Estos consejos tenían amplias y crecientes facultades para el gobierno local y además muchos de ellos eran representativos de todas las razas de la comunidad; los representantes de estas razas legislaban juntos al nivel local, a base de una igualdad absoluta, en asuntos que afectaban a todas las razas de la comunidad. Por lo tanto, en las actividades de los consejos de administración local quedaban incluidas casi tres cuartas partes de toda la población del Territorio, resultado que incluso las predicciones más optimistas a duras penas podrían haber previsto incluso hacía un año, y mucho menos hacía tres años.

60. La situación en el terreno económico ciertamente no era desalentadora. De conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Gobierno australiano había hecho las gestiones necesarias para que visitara el Territorio en 1963 una misión del BIRF, y actualmente estaba siguiendo las orientaciones en materia de desarrollo sugeridas por esa misión.

61. El representante de la Unión Soviética había sugerido que Australia fomentaba en Papua y en Nueva Guinea sólo aquellas actividades que no competían con las industrias australianas. El representante de Australia deseaba señalar que su país estaba creando las industrias más convenientes para los territorios, según las recomendaciones del BIRF. Una de las industrias que presentaba grandes posibilidades de éxito era la ganadería; era bien sabido que la cría de ganado era una de las industrias más importantes de Australia. La producción de madera (que solamente cedía a la copra como

producto del Territorio y como fuente de ingreso) era otra industria que Australia fomentaba vigorosamente en el Territorio, a pesar de ser bien conocido que su país producía gran cantidad de madera en sus extensas zonas de bosques.

62. El ingreso anual de los territorios procedía de dos fuentes: subsidios libres de intereses y no reembolsables hechos por el Gobierno australiano, e ingresos producidos en los propios territorios. En el curso de los diez últimos años, esos subsidios habían aumentado de 20 millones a casi 80 millones de dólares de los Estados Unidos. Además, en el presupuesto australiano se consignaban sumas importantes a los departamentos del Gobierno australiano que actuaban en los territorios. En total, Australia había contribuido al desarrollo de Papua y Nueva Guinea con unos 100 millones de dólares de los EE. UU. Además, señaló que en el presupuesto de 1966/67, los ingresos internos del Territorio se habían elevado a aproximadamente 48 millones de dólares de los Estados Unidos, cifra que representaba un máximo. Como todos sabían, hasta el último céntimo de estos ingresos obtenidos localmente los gastaba Australia directamente en el Territorio y en provecho de éste.

63. Por último, con respecto a Nauru, apuntó que el representante de la Unión Soviética había dado una idea errónea al comparar la cifra de derechos pagadera a los nauruanos con el precio en Australia del superfosfato, de alrededor de 40 dólares por tonelada. Una cifra más correcta sería del orden de 24 a 25 dólares por tonelada (según los factores locales, lugar de entrega, etc.).

64. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas opinó que, como Australia había estado administrando los territorios durante varios decenios, el desarrollo político de los Territorios de Nueva Guinea y de Papua debería haber sido mayor. La realidad era que se había hecho poco por preparar a los habitantes autóctonos para la libre determinación y la independencia.

65. Como seis de los diez miembros del comité de reforma constitucional eran australianos, incluidos tres altos funcionarios coloniales, no era sorprendente que el comité no hubiese podido elaborar medidas concretas para llevar a los territorios al gobierno propio ni hubiera podido recomendar una fecha precisa para la concesión de la independencia.

66. Respecto a la declaración hecha por el representante de Australia en el sentido de que los territorios no se utilizaban como lugares de tránsito para las tropas que se enviaban a Viet-Nam, el representante de la URSS deseaba señalar que la delegación de la Unión Soviética ya había presentado pruebas a ese respecto. Además, según un artículo aparecido en el *South Pacific Post* el 2 de junio de 1965, aviones australianos habían proporcionado protección aérea a un transporte militar australiano que llevaba tropas a Viet-Nam, y se habían utilizado como bases de tránsito un aeropuerto de Nueva Guinea y otros lugares.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL RESPECTO DEL INFORME DEL SUBCOMITÉ II

67. El representante de la República Unida de Tanzania opinó que la recomendación que figuraba en el inciso f) del párrafo 29 del informe del Subcomité (véase anexo) no tenía suficiente alcance, pues se limi-

taba a decir que la Potencia Administradora "debería hacer todo lo posible para satisfacer el deseo del pueblo de Nauru de alcanzar la independencia en enero de 1968". Según el párrafo 8 del informe, una decisión al respecto "dependerá en gran parte de la experiencia que los habitantes de Nauru adquieran gracias al recién formado Consejo Legislativo". Tal posición parecía revelar la suposición paternalista de que los habitantes de Nauru no eran capaces de pensar por sí mismos. El representante de la República Unida de Tanzania sugirió que el inciso f) del párrafo 29 se enmendase de manera que expresase lo siguiente: "La Potencia Administradora deberá adoptar medidas concretas de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) para satisfacer el deseo del pueblo..."

68. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética dijo que, aunque las recomendaciones y conclusiones del informe del Subcomité II eran en general positivas, la delegación de la URSS estimaba que no tenían el alcance debido. En ellas se debería también condenar el uso de los territorios en fideicomiso como lugares de tránsito para las tropas que se enviaban al Asia sudoriental con fines agresivos.

69. La representante de los Estados Unidos de América reservó la posición de su delegación respecto al informe del Subcomité, particularmente en lo referente a la recomendación sobre el envío de una misión visitadora, y señaló que el Consejo de Administración Fiduciaria enviaba regularmente misiones visitadoras a los distintos territorios.

70. El representante de Australia reservó la posición de su delegación con respecto al informe del Subcomité, en parte porque creía que algunos hechos y acontecimientos tal vez no se hubiesen representado tan claramente como se debiera, y en parte porque como representante de la Autoridad Administradora no le correspondía hacer recomendaciones a su propio Gobierno.

71. El representante del Reino Unido reservó la posición de su Gobierno con respecto al informe del Subcomité.

72. En su 469a. sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1966, el Comité Especial aprobó sin objeciones el informe del Subcomité II sobre el Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, e Islas Cocos (Keeling) (véase anexo) e hizo suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo, con la modificación consistente en substituir la expresión "debería hacer todo lo posible para satisfacer", que figura en el inciso f) del párrafo 29, por las palabras "deberá adoptar medidas concretas de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) para satisfacer".

73. Las conclusiones y recomendaciones que aprobó el Comité Especial son las siguientes.

Conclusiones

Generalidades

a) El Comité Especial toma nota con satisfacción de la declaración de la Potencia Administradora de que su política consiste en trabajar por el progreso social, educativo, económico y político de los habitantes de estos territorios.

b) Considera que el progreso hacia la aplicación de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General ha sido lento.

Territorio en fideicomiso de Nauru

c) El Comité Especial toma nota de que los habitantes de Nauru han expresado su deseo de lograr la independencia para el 31 de enero de 1968.

d) Está enterado de los graves problemas que plantea el reasentamiento de los habitantes de Nauru.

e) Toma nota con satisfacción de que se ha establecido un Consejo Legislativo en Nauru. Sin embargo, considera que los poderes del Consejo Legislativo son restringidos.

f) Toma nota de que en breve se celebrarán conversaciones entre los nauruanos y los representantes de la Autoridad Administradora acerca de la propiedad y el control de la explotación de la industria del fosfato.

Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea

g) El Comité Especial toma nota de los cambios políticos y constitucionales que se han producido en los territorios; y sobre todo del establecimiento de la Asamblea Legislativa y del aumento del número de consejos de administración local. Encarece a la Potencia Administradora que adopte cuanto antes más medidas para que la Asamblea Legislativa funcione como un cuerpo totalmente representativo y eficaz.

h) Toma en cuenta los esfuerzos del Gobierno australiano en pro del desarrollo económico y social del Territorio, y en particular del establecimiento de la Universidad de Papua y Nueva Guinea.

Islas Cocos (Keeling)

i) Las Islas Cocos tienen problemas especiales relacionados con su tamaño y viabilidad económica, pero eso no debería constituir un obstáculo para que la Potencia Administradora aplicase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

*Recomendaciones**Generalidades*

a) El Comité Especial reafirma el derecho inalienable de todos los habitantes de estos territorios a la libre determinación y a la independencia, conforme a la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

b) Debería permitirse que los pueblos de estos territorios expresen sus deseos de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) mediante procesos democráticos bien definidos y bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

c) Se necesita una misión visitadora, que resultaría muy útil para sondear el clima político y las aspiraciones de los habitantes. En consulta con la Potencia Administradora podrían adoptarse medidas para organizar tal visita.

Territorio en fideicomiso de Nauru

d) La aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y el reasentamiento de los nauruanos son dos cuestiones distintas que deben resolverse por separado, concediéndose preferencia a la primera, de acuerdo con los deseos de los propios nauruanos.

e) Debería darse a los nauruanos el control absoluto de sus recursos económicos naturales. El Comité

Especial espera que en las próximas conversaciones entre los habitantes de Nauru y la Autoridad Administradora se resuelvan todas las cuestiones pendientes a este respecto.

f) La Potencia Administradora deberá adoptar medidas concretas de conformidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) para satisfacer el deseo del pueblo de Nauru de alcanzar la independencia en enero de 1968.

Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea

g) Deberían adoptarse medidas en la esfera constitucional para suprimir los puestos especiales y reservados en la Asamblea Legislativa y para acelerar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

h) Deberían fortalecerse más los consejos de administración local, a fin de dar a la población la posibilidad de ejercer la autonomía en asuntos municipales.

i) El Comité Especial estima que deberían continuarse con ritmo acelerado los esfuerzos en las esferas económica y educativa.

Islas Cocos (Keeling)

j) El Comité Especial pide que se brinde al pueblo del territorio una oportunidad de expresar sus deseos acerca del futuro y de la ayuda que en este sentido pueden prestarle las Naciones Unidas.

ANEXO

[A/AC.109/L.318/Add.5]

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NAURU, PAPUA Y EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE NUEVA GUINEA, E ISLAS COCOS (KEELING)

Relator: Sr. C. R. Gharekhan (India)

Examen de la cuestión por el Subcomité

1. El Subcomité consideró el Territorio en fideicomiso de Nauru, Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y las Islas Cocos (Keeling) en las sesiones 51a., 52a., 53a. y 55a. celebradas los días, 23, 25 y 29 de agosto y 7 de septiembre de 1966.

2. El Subcomité tuvo ante sí los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XIX, párrs. 1 a 48).

3. El representante de Australia dijo que después del último informe del Gobierno de Australia al Subcomité y al Comité Especial, presentado en 1964, sobre la evolución de los territorios, se sometió al Consejo de Administración Fiduciaria información más reciente en su 33º período de sesiones que celebró en junio y julio de 1966. Los últimos datos sobre los territorios se distribuirán a los miembros del Subcomité.

4. Las Islas Cocos (Keeling) tienen unos 470 habitantes, sin contar los europeos que están allí de paso; los autóctonos descendien de malayos llegados de las Islas en 1827. Las precarias condiciones de vida en las pequeñas islas coralinas han originado una importante emigración a Borneo y Malasia, iniciada en 1948. La estación cablegráfica, que funciona desde hace cincuenta años, está a punto de cerrarse, y aparte del aeropuerto civil y de los servicios públicos, la principal actividad económica del Territorio es el cultivo del cocotero. Los isleños ejercen su derecho al autogobierno de conformidad con sus costumbres, tradiciones y religión. Los servicios de sanidad son excelentes y en el Territorio se disfruta de un ambiente de tranquilidad, pues debido a su pequeño tamaño depende del apoyo permanente de un país más grande.

5. La población de Nauru, que aumenta con rapidez, oscila entre 2.700 y 2.800 habitantes indígenas. Los isleños gozan de un alto nivel de vida gracias a las importantes regalías que pagan los Comisionados Británicos del Fosfato por el derecho de transformar el fosfato en bruto que se extrae. Los ingresos per cápita representan unos 3.000 dólares estadounidenses, pero las reservas de fosfato se agotarán por completo en unos treinta años.

6. Las tierras de Nauru son áridas y la isla carece de agua dulce. Con el consentimiento de los dirigentes nauruanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) envió un equipo de expertos para analizar los problemas que plantea el agotamiento gradual de los yacimientos de fosfato. Esos expertos rindieron un informe, que están estudiando los dirigentes nauruanos y el Gobierno australiano. A su debido tiempo, la delegación de Australia presentará el informe al Subcomité y al Comité Especial.

7. A petición de los habitantes de Nauru también se examina la posibilidad de reasentarlos en otro lugar. El Gobierno australiano ha ofrecido la plena ciudadanía y toda clase de asistencia a los nauruanos que quieran emigrar a Australia. También les ha ofrecido una fértil isla en las proximidades de la costa australiana. Sin embargo, por diversos motivos los nauruanos no ven clara la posibilidad de aceptar esas ofertas, pero sería un error creer que así desaparece la posibilidad de alguna forma de reasentamiento. La cuestión está íntimamente ligada al resultado de la investigación sobre rehabilitación de la tierra agotada de fosfatos, que realiza el Grupo de Expertos.

8. Hace poco se ha creado un Consejo Legislativo y todos los miembros fueron elegidos por sufragio universal de los adultos. Los dirigentes nauruanos han pedido su independencia a la Autoridad Administradora para 1968. El asunto se está discutiendo, pero la decisión dependerá en gran parte de la experiencia que los habitantes de Nauru adquieran gracias al recién formado Consejo Legislativo.

9. Australia administra conjuntamente, dentro de una unión administrativa establecida con el consentimiento de las Naciones Unidas, el Territorio no autónomo de Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, que tienen un Parlamento único, un solo sistema judicial y una misma administración pública. En 1964, tras una intensa campaña para empadronar a la población de votantes (incluso en las zonas más remotas e inhóspitas), se celebraron elecciones con un colegio electoral único y mediante el sufragio universal de los adultos. Como consecuencia de esas elecciones los dos Territorios tienen un nuevo órgano (la Asamblea Legislativa) que sustituye al antiguo Consejo Legislativo de 37 miembros. La nueva Asamblea Legislativa se compone de 54 miembros elegidos, 38 de ellos autóctonos, y 10 miembros designados. Además, siete de los miembros elegidos forman parte de un Consejo de Administración de once miembros, que asesora a la Asamblea Legislativa en cuestiones administrativas. En 1965, la Asamblea Legislativa creó un comité de reforma constitucional, que incluía una considerable representación indígena, para que presentara propuestas acerca de la futura evolución constitucional de los territorios. El comité ha presentado su informe a la Asamblea Legislativa. Después que ésta decida respecto del informe, toda la cuestión será estudiada por el Parlamento australiano, para determinar cuál ha de ser la etapa siguiente.

10. El rápido desarrollo político de los territorios se ha debido sobre todo al establecimiento de consejos de administración local. El desarrollo de estos consejos ha cobrado tal impulso y vigor que su número sobrepasa las previsiones más optimistas de hace apenas uno o dos años. En Papua y Nueva Guinea hay hoy 123 consejos, que representan cerca de millón y medio de habitantes, los cuales eligieron a los miembros de aquéllos por sufragio de adultos. Un hecho muy significativo es que 35 de esos consejos tienen una composición multirracial. Al mismo tiempo, el número de funcionarios locales de la segunda división de la administración pública aumentó de 22 a 234 en 1964, mientras que los empleados públicos locales de la tercera división (167 en 1964) son hoy 9.268. En la actualidad, los contratos de los funcionarios públicos del exterior se hacen a corto plazo, para facilitar su sustitución por empleados públicos autóctonos a la mayor brevedad.

11. Para el desarrollo de los territorios es esencial el dinero que proporciona el Gobierno de Australia. La partida más importante del presupuesto del territorio es el subsidio de Australia, que ha aumentado año tras año, de modo que en el ejercicio de 1965-1966 llegó a 68.820.000 dólares estadounidenses. Este subsidio no devenga intereses ni es reembolsable. En los últimos diez años se ha elevado de 19.840.000 dólares estadounidenses en 1955-1956, a la cifra actual de 68.820.000 dólares. Se espera que aumente de nuevo en el presupuesto de 1966-1967. Además, en el presupuesto de Australia se han destinado créditos importantes para los Ministerios australianos que actúan en el Territorio (aviación civil, por ejemplo). El Gobierno australiano destinará en total al desarrollo de Papua y Nueva Guinea una suma del orden de 100 millones de dólares. En la esfera económica, el Gobierno australiano sigue las recomendaciones sobre desarrollo formuladas por una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (de acuerdo con el plan básico del Gobierno de Australia y por invitación de éste y también con recomendaciones de las Naciones Unidas) que visitó el territorio en 1963. En 1965 nombró un asesor económico. En los últimos años, los servicios de sanidad se han ampliado de una forma sin precedentes en otros territorios de topografía y situación social análogas, y se ha realizado un intenso esfuerzo para fomentar la enseñanza. Se ha fundado la Universidad de Papua y Nueva Guinea, que tiene una matrícula de 50 estudiantes autóctonos para el primer año de estudios. Las instalaciones del establecimiento se amplían con rapidez. También se ha creado un colegio universitario para personal administrativo, a fin de capacitar a la población autóctona en las técnicas administrativas modernas. Además existe un instituto de administración técnica superior.

12. Papua y Nueva Guinea todavía no son independientes; su futuro político depende por completo de los deseos que su pueblo expresa con entera libertad, y a él corresponde determinar la fecha de la libre determinación, la autonomía o la independencia. Hay un rápido avance político y social y un enorme progreso hacia la armonía racial. El Comité Especial quizá desee estudiar la conveniencia de pedir que se acelere la consecución de los objetivos absolutos establecidos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El Gobierno australiano opina que el logro apresurado de esas metas reviste menos importancia que garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de que ya disfruta el pueblo de los territorios, lo cual no puede decirse de otros que examina el Comité Especial y cuyo principal problema es la negación de las libertades y los derechos humanos. El Gobierno australiano no está dispuesto a dejar de juzgar en todos los aspectos, salvo el de la aceleración. No se trata sólo de ir más deprisa, sino también de llegar con seguridad al final de la jornada.

13. Al considerar la situación de Nauru y las Islas Cocos (Keeling), el Comité Especial debería tener presente que la solución para los territorios pequeños y aislados no tiene necesariamente que ser la misma que para otras zonas de mayor extensión y más densamente pobladas. Aunque es esencial garantizar que todos los pueblos disfruten de sus libertades y derechos fundamentales y realicen sus aspiraciones, las formas políticas con que es factible alcanzar esos objetivos pueden y deben ser diferentes.

14. El representante de los Estados Unidos de América dijo que mientras Papua y Nueva Guinea han progresado considerablemente hacia la libre determinación, aún no han alcanzado la viabilidad económica, que debe acompañar a la independencia política. Sin embargo, creía que el Gobierno de Australia trataba el problema de manera inteligente y enérgica. Esperaba que las recomendaciones del BIRF sirvieran de pauta para establecer una economía viable.

15. La creación de un Consejo Legislativo y de un Consejo Ejecutivo en Nauru era un acontecimiento político importante. Aunque se ha demostrado en muchas ocasiones la voluntad de los nauruanos de seguir constituyendo una entidad nacional independiente, éstos no deben desdeshar sin más trámite la posibilidad de un reasentamiento para evitar un dilema económico. Esperaba que las conclusiones del Grupo de la FAO, que estudia los posibles recursos naturales del Territorio, ayudaran al pueblo de Nauru a tomar una decisión acertada.

16. Las Islas Cocos (Keeling) plantean un problema excepcionalmente difícil, por tener poca población y recursos económicos tan exiguos, pero convenía con el representante de Australia en que merecen, como los demás pueblos, la misma oportunidad de lograr su progreso económico y social y realizar sus aspiraciones políticas.

17. El representante de Sierra Leona agradeció al Gobierno australiano su colaboración y la información que ha proporcionado al Subcomité. La situación política de las Islas Cocos (Keeling) es bastante diferente de la de otros Territorios que ha examinado el Subcomité, pero parece que la Potencia Administradora no trata de preparar a ese territorio para la libre determinación y la posible independencia. Había que reconocer que sería difícil que esa población llegara a bastarse a sí misma, pero se debería implantar un sistema de enseñanza unificado y con bases más amplias, y ayudar a los isleños a establecer instituciones mediante las cuales puedan elegir sus representantes y expresar sus opiniones acerca de su porvenir. Esperaba que el Gobierno de Australia adoptara medidas para modificar en forma adecuada la concesión otorgada en 1886 a la familia Clunies-Ross y ofrecer a los isleños la posibilidad de unirse a otras poblaciones de la región.

18. Los nauruanos tienen el mayor interés en conservar su soberanía y su identidad nacional, y, por lo tanto, no están dispuestos a abandonar su tierra y emigrar en masa a Australia o a la Isla de Curtis. Además, sostienen que son los legítimos propietarios de los yacimientos de fosfato del Territorio, y desean ejercer el control de esa única fuente de riqueza que les ha dado la naturaleza. Es de esperar que se llegará a una solución equitativa mediante un acuerdo entre los nauruanos, la Potencia Administradora y los Comisionados Británicos del Fosfato, por el que se permita a los nauruanos construir su porvenir económico sobre una base sólida. Se debería informar al Subcomité sobre la reacción de la Autoridad Administradora y los dirigentes nauruanos ante las recomendaciones de la comisión mixta para la rehabilitación de la isla, en la que participó la FAO. Encarecía al Gobierno australiano que hiciera todo lo posible para satisfacer el deseo de los nauruanos de alcanzar la plena independencia en enero de 1968.

19. El porcentaje de la mano de obra disponible que se emplea hoy en Nueva Guinea y Papua es más bien pequeño y cabe esperar que el desarrollo de nuevas industrias llevará a un rápido aumento en el empleo. En cambio, era alentador informarse de que se ampliaba la nueva Universidad de Nueva Guinea y Papua, pues el mayor número de personas con formación profesional es indispensable para el desarrollo económico. Esperaba que el Gobierno australiano ayudara a los pueblos de Nueva Guinea y Papua a avanzar con más rapidez hacia la libre determinación y la independencia.

20. El representante de la India declaró que era evidente que los nauruanos tenían un gran sentido de identidad nacional y de nacionalidad separada, lo que explicaba por qué se habían negado a abandonar su patria pese a la perspectiva de que pronto se agotarían las reservas de fosfatos. Aunque acogía complacido las medidas que había adoptado el Gobierno australiano para aplicar la resolución 2111 (XX), deploraba que el Consejo Legislativo recién establecido no fuera un órgano totalmente electivo y que tuviera poderes restringidos. A pesar del deseo expresado por los nauruanos de alcanzar la independencia para enero de 1968 y de las recomendaciones de la Asamblea General a tal efecto, el Gobierno australiano había sugerido que las conversaciones acerca de un progreso político mayor debían aplazarse por dos o tres años a fin de permitir que el Consejo Legislativo adquiriese experiencia y de dar tiempo para establecer un Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el portavoz del pueblo nauruano en el Consejo de Administración Fiduciaria había insistido en que hubiera nuevas conversaciones constitucionales en 1967, a fin de que la isla alcanzase la plena independencia en enero de 1968. El orador instó al Gobierno australiano a colaborar con las Naciones Unidas adoptando las medidas necesarias para atender esta solicitud.

21. En vista del rápido agotamiento de los yacimientos de fosfato, las conversaciones propuestas entre los dirigentes nauruanos y el Gobierno de Australia eran de vital importancia para el futuro económico del territorio. El Jefe Principal de Nauru

había manifestado al Consejo de Administración Fiduciaria que la isla reclamaba la propiedad de los citados yacimientos y que estaba dispuesta a retener a los Comisionados Británicos del Fosfato como agentes directores pagándoles una remuneración justa y a comprar el equipo. Nauru debía tener el control total de sus recursos de fosfato, y como era probable que se agotaran en unos 30 años había que conceder sin demora la independencia al territorio para que los nauruanos pudieran diversificar su economía y establecer otras industrias. A este respecto, pidió al representante de Australia que explicase el motivo de la gran disminución de las importaciones de Nauru procedentes de Australia.

22. Era satisfactorio tomar nota de la importante evolución constitucional que había tenido lugar en Papua y Nueva Guinea, pero el ritmo general de progreso parecía demasiado lento. La Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, 1962, recomendó que se estableciese un Parlamento totalmente electivo de 100 miembros. Sin embargo, tres años más tarde Papua y Nueva Guinea tenían una Asamblea Legislativa con 64 miembros únicamente, 44 de los cuales habían sido elegidos directamente por la población autóctona. Además, desde 1964 no se habían ampliado los poderes del órgano legislativo ni se habían concedido poderes ejecutivos a la población autóctona, como sugirió la Misión Visitadora. En tales circunstancias, el orador esperaba que el Gobierno australiano considerara favorablemente las recomendaciones del comité especial de la Asamblea Legislativa. Asimismo esperaba que no se continuase restringiendo los poderes de los consejos de administración local para revisar sus presupuestos.

23. El representante de la India acogía con satisfacción el nombramiento de un asesor económico y la aprobación de leyes para establecer un banco de desarrollo. Sin embargo, le preocupaba que Papua y Nueva Guinea continuasen dependiendo tanto de los subsidios del Gobierno australiano. La Potencia Administradora tenía la obligación de reducir la dependencia económica de los territorios y para ello de impulsar el desarrollo de las industrias manufactureras locales y emplear un mayor porcentaje de la población masculina adulta autóctona. La creación de la nueva Universidad y del Instituto de Enseñanza Técnica Superior en Papua y Nueva Guinea contribuiría indudablemente mucho a la formación del personal indígena.

24. El único medio eficaz de determinar el progreso constitucional de Papua y Nueva Guinea y el deseo de los habitantes indígenas de libertad e independencia era enviar una misión visitadora a los territorios. Esperaba que el Gobierno australiano colaboraría con las Naciones Unidas ayudando a la población de Papua y Nueva Guinea a ejercer su derecho a la libre determinación.

25. El representante de Chile se manifestó complacido del progreso notificado respecto de cada uno de los territorios. En las Islas Cocos (Keeling) la pequeña población constituía el principal obstáculo a la independencia política y económica, pero esperaba que se encontrase una solución que permitiera a los habitantes ejercer su derecho a la libre determinación. Deberían ampliarse los servicios de enseñanza, a fin de prepararlos para esa eventualidad.

26. El inminente agotamiento de las reservas de fosfato de Nauru le preocupaba mucho, porque los elevados ingresos per cápita de la isla se debían a las regalías del fosfato. La Autoridad Administradora debía realizar todos los esfuerzos posibles para solucionar el problema. El estudio de la FAO sobre los recursos agrícolas de Nauru podía proporcionar pautas útiles para aumentar la superficie cultivable. Teniendo en cuenta el fuerte deseo de los nauruanos de conservar su identidad y de alcanzar la independencia para 1968, los poderes que ejercía el Consejo Legislativo eran demasiado limitados para adquirir la experiencia política requerida y debían ser ampliados.

27. En Nueva Guinea y Papua, el establecimiento de la Asamblea Legislativa, con 54 miembros elegidos de un total de 64; la creación de un comité de estudio de la Constitución, y la ampliación del sistema de consejos de administración local elegidos por sufragio universal son indicios de que estos territorios avanzan con rapidez hacia la autonomía y la independen-

cia. Aunque la Universidad de Papua y Nueva Guinea contribuiría a proporcionar la capacitación técnica de nivel superior que exige el gobierno propio, el ritmo de la educación debería acelerarse todavía más. También se habían logrado notables progresos en el robustecimiento de la economía de los territorios, y el Gobierno australiano había adoptado medidas para aplicar las recomendaciones del BIRF. Sin embargo, la dependencia económica de los Territorios seguía constituyendo un obstáculo para su futura independencia. A pesar de los problemas geográficos y climáticos, de comunicaciones y de diferencias lingüísticas, el orador confiaba en que los habitantes adquirirían un sentido de identidad nacional y alcanzarían la meta de la libre determinación y la independencia.

Conclusiones del Subcomité

Generalidades

28. a) El Subcomité toma nota con satisfacción de la declaración de la Potencia Administradora de que su política consiste en trabajar por el progreso social, educativo, económico y político de los habitantes de estos territorios.

b) El Subcomité considera que el progreso hacia la aplicación de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General ha sido lento.

Territorio en fideicomiso de Nauru

c) El Subcomité toma nota de que los habitantes de Nauru han expresado su deseo de lograr la independencia para el 31 de enero de 1968.

d) El Subcomité está enterado de los graves problemas que plantea el reasentamiento de los habitantes de Nauru.

e) El Subcomité toma nota con satisfacción de que se ha establecido un Consejo Legislativo en Nauru. Sin embargo, considera que los poderes del Consejo Legislativo son restringidos.

f) El Subcomité toma nota de que en breve se celebrarán conversaciones entre los nauruanos y los representantes de la Potencia Administradora acerca de la propiedad y el control de la explotación de la industria del fosfato.

Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea

g) El Subcomité toma nota de los cambios políticos y constitucionales que se han producido en los territorios, y sobre todo del establecimiento de la Asamblea Legislativa y del aumento del número de consejos de administración local. El Subcomité encarece a la Potencia Administradora que adopte cuanto antes más medidas para que la Asamblea Legislativa funcione como un cuerpo totalmente representativo y eficaz.

h) El Subcomité toma en cuenta los esfuerzos del Gobierno australiano en pro del desarrollo económico y social del Territorio, y en particular del establecimiento de la Universidad de Papua y Nueva Guinea.

Islas Cocos (Keeling)

i) Las Islas Cocos tienen problemas especiales relacionados con su tamaño y viabilidad económica, pero eso no debería constituir un obstáculo para que la Potencia Administradora aplicase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Recomendaciones del Subcomité

Generalidades

29. a) El Subcomité reafirma el derecho inalienable de todos los habitantes de estos territorios a la libre determinación y a la independencia, conforme a la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

b) Debería permitirse que los pueblos de estos territorios expresen sus deseos de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) mediante procesos democráticos bien definidos y bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

c) Se necesita una misión visitadora, que resultaría muy útil para sondear el clima político y las aspiraciones de los habitantes. En consulta con la Potencia Administradora podrían adoptarse medidas para organizar tal visita.

Territorio en fideicomiso de Nauru

d) La aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y el reasentamiento de los nauruanos son dos cuestiones distintas que deben resolverse por separado, concediéndose preferencia a la primera, de acuerdo con los deseos de los propios nauruanos.

e) Debería darse a los nauruanos el control absoluto de sus recursos económicos naturales. El Subcomité espera que en las próximas conversaciones entre los habitantes de Nauru y la Potencia Administradora se resuelvan todas las cuestiones pendientes a este respecto.

f) La Potencia Administradora debería hacer todo lo posible para satisfacer el deseo del pueblo de Nauru de alcanzar la independencia en enero de 1968.

Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea

g) Deberían adoptarse medidas en la esfera constitucional para suprimir los puestos especiales y reservados en la Asamblea Legislativa y para acelerar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

h) Deberían fortalecerse más los consejos de administración local, a fin de dar a la población la posibilidad de ejercer la autonomía en asuntos municipales.

i) El Subcomité estima que deberían continuarse con ritmo acelerado los esfuerzos en las esferas económica y educativa.

Islas Cocos (Keeling)

j) El Subcomité pide que se brinde al pueblo del territorio una oportunidad de expresar sus deseos acerca del futuro y de la ayuda que en este sentido pueden prestarle las Naciones Unidas.

CAPÍTULO XX*

BRUNEI

INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Introducción

1. La información sobre Brunei figura ya en el informe presentado por el Comité Especial a la Asamblea General en sus decimonoveno y vigésimo período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. XXI; y A/6000/

Rev.1², cap. XX). A continuación se proporciona información complementaria sobre los últimos acontecimientos³.

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información que se presenta en este documento ha sido obtenida de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, el 26 de julio de 1965, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, correspondiente al año que termina el 31 de diciembre de 1964.

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).*

Generalidades

2. A fines de 1963 la población de Brunei ascendía a 98.438 habitantes, lo que representa un aumento del 7,9% sobre años anteriores.

Evolución política y constitucional

3. Según se ha indicado en informes anteriores a la Asamblea General, los Consejos Ejecutivo y Legislativo que se establecieron en 1963 estaban integrados totalmente por miembros oficiales y miembros no funcionarios designados hasta el 20 de marzo de 1965, fecha en que se celebraron elecciones. En dicha fecha se eligieron diez miembros (los otros once miembros son de nombramiento directo) al nuevo Consejo Legislativo. Los votantes eligieron asimismo a 55 miembros de los cuatro consejos de distritos de Brunei. Participó en la elección más del 80% de los 19.000 votantes de Brunei.

4. No se dispone de información con respecto a la decisión de implantar el sistema ministerial, que se anunció al terminar las consultas celebradas en Londres en mayo de 1965 entre el Sultán y varios ministros británicos. Sin embargo, se informa que el Consejo Ejecutivo fue convertido en Consejo de Ministros, en el cual los legisladores sin experiencia previa podrían servir en calidad de ministros ayudantes. Se informa que el Sultán proyecta celebrar una conferencia constitucional a fin de establecer ulteriormente un poder legislativo plenamente electivo y un Consejo de Ministros compuesto en su totalidad de legisladores de elección popular. Sin embargo, no se han anunciado las fechas en que habrán de aplicarse dichas medidas.

5. El Sultán continúa investido de la autoridad suprema y todas las leyes que apruebe el Consejo Legislativo deberán ser aprobadas por él.

Partidos políticos

6. En las elecciones de 1965, nueve de los candidatos electos eran independientes. El décimo representaba al Brunei People's Alliance Party (BPAP). Según se informa, este partido, que se constituyó en 1963, favorecía el ingreso de Brunei en la Federación de Malasia y ha pedido posteriormente la plena independencia del territorio dentro del Commonwealth.

7. En diciembre de 1965 se anunció la formación de un nuevo partido político con el nombre provisional de Brunei People's Front (FPF). Se informa que en este partido figuran varios de los miembros de elección popular del Consejo Legislativo y de los consejos de distrito. Su presidente ha manifestado que Brunei necesita un partido que contribuya a elevar el nivel de vida popular y que trabaje decididamente en pro de la independencia.

Condiciones económicas

8. La economía de Brunei continúa basándose principalmente en la industria petrolera. El 94% aproximadamente del valor de las exportaciones totales en 1964 consistió en exportaciones de petróleo. Los alquileres, las regalías y los impuestos por concepto de explotación minera que se cargan sobre la industria petrolera constituyen la mayor parte de los ingresos totales del Territorio; dicha industria es, después del Gobierno, la que emplea el mayor número de personas en la isla. Entre los demás sectores de la economía cabe mencionar la ex-

plotación del caucho, la agricultura de subsistencia, las pesquerías, los productos forestales y ciertas industrias en pequeña escala.

9. Aparte del petróleo, hay otro artículo de exportación importante, que es el caucho. Entre las importaciones principales figuran los comestibles, los artículos manufacturados, la maquinaria y el equipo de transporte. No se dispone de información detallada sobre las importaciones y exportaciones de 1964. El valor total de las exportaciones fue de 187.383.007 dólares malayos⁴, lo que supone un aumento de 4.474.130 dólares malayos con respecto a 1963. Las importaciones se justificaron en 102.181.131 dólares malayos, contra 66.013.300 dólares malayos en 1963.

10. Los ingresos anuales de Brunei son muy superiores a sus gastos, y ello ha hecho que se acumule un gran excedente; en 1964 éste ascendía en total a 930.417.373 dólares malayos, suma que ya ha sido invertida. Los ingresos proceden principalmente de los impuestos, las regalías, los alquileres, los intereses y de sumas percibidas en efectivo. A finales de 1963, se firmó un nuevo acuerdo petrolero entre el Gobierno de Brunei y la Brunei Shell Petroleum Company, en el que se estipula que dicha compañía debe pagar impuestos a base de una división igual de las utilidades. El personal de las compañías en Brunei no está sujeto todavía al pago de impuestos sobre la renta, pero las utilidades de las mismas están gravadas con un impuesto de esa índole del 30%. En 1964 los ingresos del Territorio sumaron 134 millones de dólares malayos y los gastos fueron de 63 millones. Las correspondientes cifras para 1963 fueron de 114 millones y 64 millones respectivamente.

Condiciones sociales

Mano de obra

11. La Autoridad Administradora no comunicó cambio alguno de importancia en los problemas y la política general relativos a los salarios de la mano de obra y a las condiciones de empleo, ni en la organización administrativa encargada de las actividades oficiales concernientes a la mano de obra. El total de la fuerza de trabajo aumentó de 6.826 en 1963 a 7.094 en 1964. La gran mayoría de sus integrantes la constituían los trabajadores empleados por el Gobierno o por la Brunei Shell Petroleum Company.

Salud pública

12. Brunei cuenta con dos hospitales oficiales y uno de una compañía privada, que tienen en total 343 camas. Su personal médico se compone de 18 médicos matriculados, 46 auxiliares médicos y 28 enfermeros diplomados o capacitados. En el Territorio no se practica la medicina con carácter particular. El 7,61% aproximadamente de todos los gastos oficiales de 1964 correspondió a los gastos corrientes y a los gastos de capital por concepto de salud pública.

Situación de la enseñanza

13. En 1964, había 86 escuelas primarias y jardines de infantes públicos con 15.222 alumnos, al paso que en

⁴Un dólar malayo equivale a 2 chelines y 4 peniques, o a 0,327 de dólar de los Estados Unidos.

1963 dichas escuelas sumaban 77 con 13.577 alumnos. Además había siete escuelas secundarias con 1.658 estudiantes matriculados, contra 1.274 el año anterior. Las escuelas primarias y secundarias independientes tenían 7.060 alumnos (6.506 en 1963) y 1.409 estudiantes (1.219 en 1963), respectivamente. La escuela normal oficial tenía 249 estudiantes, contra 178 en 1963. En 1964 el personal de las escuelas públicas aumentó de

663 a 766, y el de las escuelas independientes, de 280 a 325.

14. Los gastos ordinarios de enseñanza en 1964 ascendieron a 7.958.110 dólares malayos, lo que representa un aumento de 1.088.102 dólares malayos con respecto a 1963. Los gastos de capital de esos dos años sumaron 230.798 y 748.194 dólares malayos, respectivamente.

CAPÍTULO XXI*

HONG KONG

INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Introducción

1. La información sobre Hong Kong figura ya en el informe presentado por el Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. XXII; y A/6000/Rev.1², cap. XXI). A continuación se suministra información suplementaria sobre los acontecimientos recientes³.

Generalidades

2. Según los cálculos a fines de 1964 la población ascendía a 3.739.000 habitantes, lo que representaba un aumento de 974.000 con respecto a 1963. De este aumento, se estimaba que 6.994 representaban el saldo neto de inmigrantes.

Evolución política

3. No se dispone de información más reciente sobre la evolución política y constitucional.

Condiciones económicas

4. La economía industrial del Territorio se basa en las exportaciones y no en su mercado interno. En general, aunque sigue siendo importante la industria pesada tal como la de construcciones navales y el desguace de buques, el Territorio depende primordialmente de los productos de sus industrias ligeras. La industria textil domina la economía, representando el 52% de todas las exportaciones locales y ocupando el 42% de su fuerza de trabajo industrial; es asimismo un factor importante en el comercio internacional de textiles. En todos los sectores, predomina la manufactura y elaboración de artículos de algodón. La manufactura de prendas continúa siendo el sector más vasto dentro de la industria, que da empleo a 59.000 trabajadores. De un total de 682 millones de dólares de Hong Kong⁴ en 1961, el valor de las exportaciones de prendas de vestir aumentó

a 1.169 millones de dólares de Hong Kong en 1964, que fueron producidas por unas 1.070 fábricas.

5. La manufactura de artículos plásticos sigue en orden de importancia. Las exportaciones de productos manufacturados por la industria ascendieron aproximadamente a 613 millones de dólares de Hong Kong en 1964. Diversas otras industrias ligeras han continuado ampliándose. Entre éstas figuran la manufactura de equipo de climatización, artículos de aluminio, relojes, artefactos y equipo eléctricos, utensilios de hierro esmaltado, productos alimenticios y bebidas, calzado, productos de metal liviano, equipo óptico, pinturas, frascos y muebles y accesorios. Se ha registrado un incremento notable de la industria electrónica. La manufactura y montaje de radioreceptores de transistores empezó en 1959 y a partir de entonces las exportaciones de este producto han duplicado su volumen cada año hasta alcanzar un total de 3.900.000 unidades con un valor de 95 millones de dólares de Hong Kong en 1964. La industria exporta a 67 países, pero sus mercados principales son el Reino Unido y los Estados Unidos.

6. El Territorio es uno de los centros de desguace de buques más importantes del mundo. Gran parte de la chatarra se utiliza en plantas de laminación, que producen una cantidad estimada de 17.000 toneladas largas por mes de productos de metal absorbidos por la construcción de edificios; esto satisface una parte apreciable de las necesidades de la industria de construcción. Además, una ingente cantidad de varillas y barras de hierro se embarca al exterior, principalmente a los países de Asia sudoriental.

7. Con respecto a las importaciones, China fue el principal abastecedor durante 1964, proporcionando el 22,6% del valor total de las importaciones y el 52% de los productos alimenticios importados por el Territorio. Entre los artículos procedentes de China figuraron también fibras textiles y telas. El valor de los bienes importados desde China aumentó en 32% en comparación con 1963. Las importaciones provenientes del Japón, el segundo proveedor en orden de importancia, acrecieron al 17%. Los productos textiles representaron el 38% de lo importado desde el Japón; entre los demás artículos figuraban maquinaria, metales comunes, productos químicos y muchos productos manufacturados. Las importaciones procedentes de los Estados Unidos de América subieron con respecto al año anterior, mientras que las del Reino Unido denotaron una baja. Las principales importaciones desde los Estados Unidos fueron fibras textiles, algodón en rama, tabaco, maquinaria, materiales plásticos y frutas. Las importaciones desde el Reino Unido consistieron principal-

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.9.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

² Ibid., vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

³ La información que se presenta en este documento se obtuvo de informes publicados y de la información transmitida por el Reino Unido al Secretario General el 7 de junio de 1965, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

⁴ El dólar de Hong Kong equivale a 1 chelín y 3 peniques o a 0,175 de dólar de los Estados Unidos.

mente en maquinaria, tejidos de lana y vehículos de motor.

8. Durante 1964 el 49% de todas las exportaciones locales se enviaron a dos mercados: los Estados Unidos y el Reino Unido. Los Estados Unidos, todavía el mercado más importante, importaron el 27% del valor durante 1964, con lo que aumentaron sus compras en 254 millones de dólares de Hong Kong, o sea un alza de 26% con respecto al año anterior. El valor de los productos enviados al Reino Unido ascendió a 968 millones de dólares de Hong Kong (el 22% de todas las exportaciones locales), lo que significó un aumento de 105 millones de dólares de Hong Kong, esto es, de 12%. Sin embargo, Malasia se mantiene todavía como el tercer mercado en orden de importancia de Hong Kong, y adquirió productos por un valor de 330 millones de dólares de Hong Kong en 1964. Otros mercados importantes fueron el Japón, Canadá, Australia y la República Federal de Alemania.

9. El turismo se ha convertido en una de las industrias principales del Territorio. En la región del Pacífico y el Lejano Oriente (con exclusión de Hawaii), Hong Kong fue el segundo centro importante de atracción turística después del Japón. Un estudio de 1962 estimaba que los turistas gastaban más de 2.000 dólares de Hong Kong por persona en el Territorio. Aunque Hong Kong ha sido un lugar de atracción para los viajeros desde hace años, la decisión de fomentar la industria del turismo se adoptó en 1958. Hubo aproximadamente 43.500 visitantes en el Territorio durante 1957 y en 1963 éstos aumentaron a 315.665. La cifra de 1964 se espera que exceda en casi el 25% de la de 1963, es decir, aproximadamente en 370.000 turistas.

10. En relación con las industrias primarias, el censo de 1961 indicó que un poco menos de 90.000 personas estaban ocupadas en las actividades agrícolas y de pesca, y otras 10.000 en minas y canteras. Algo más del 5% de la superficie de Hong Kong se clasifica como urbana. Los terrenos escasean y casi toda la tierra cultivada en Hong Kong está situada en los Nuevos Territorios. Más del 80% de la superficie total del Territorio son tierras marginales; la superficie arable y los estanques de agua dulce ya explotados abarcan sólo el 13,1% del total. Las zonas urbanas en expansión (el 5,5% restante) tienden a invadir más directamente tierras cultivables y no las marginales.

11. El arroz era el cultivo agrícola más importante, pero se ha registrado un incremento progresivo del cultivo comercial de hortalizas y la cría de cerdos y aves de corral. La superficie de tierras dedicadas permanentemente a la producción de hortalizas aumentó de 2.254 acres en 1954 a 8.240 acres en 1964. Seis a ocho cultivos de hortalizas se cosechan anualmente en tierras intensamente explotadas.

12. Una de las actividades principales de Hong Kong es la pesca marítima y su flota pesquera es mayor que la de cualquier otro puerto del Commonwealth. Según el censo de 1961, el número de pescadores excedía de 40.000 y se cuenta con una flota de casi 10.000 embarcaciones. Se produjeron 189 toneladas de ostras frescas, con un valor aproximado de 789.000 dólares de Hong Kong, parte de las cuales se transformaron en ostras secas o jugo de ostras y se exportaron a mercados de ultramar.

13. Hay cierta actividad minera en Hong Kong, pero con excepción del mineral de hierro de Ma On Shan, se trata de operaciones relativamente en pequeña

escala. Se extraen del subsuelo wolframita y grafito, en tanto que el caolín, el feldespato y el cuarzo se obtienen por los métodos de labor a cielo abierto. El total de la producción minera por año es de unos 800.000 dólares de Hong Kong. Todo el feldespato y el cuarzo y parte del caolín es absorbido por la industria local.

14. El valor total del comercio exterior de Hong Kong en 1964, con inclusión de las importaciones, exportaciones locales y reexportaciones, ascendió a 14.647 millones de dólares de Hong Kong, esto es, un 18% más que el año precedente. Las importaciones en 1964 se estimaron en 8.706 millones de dólares de Hong Kong, lo que indicó un aumento de 17%. El valor de las exportaciones locales acreció en 15,6% y ascendió en total a 4.428 millones de dólares de Hong Kong; las industrias textiles y de plásticos aportaron el 52% y 13,8% respectivamente del valor de los artículos exportados.

15. Hong Kong continuó siendo financieramente autosuficiente en el año 1963-1964. Durante este período, sus ingresos sumaron en conjunto 1.394 millones de dólares de Hong Kong, o sea 197 millones de dólares de Hong Kong más que el cálculo original. Los gastos para el año representaron 1.295 millones de dólares de Hong Kong, esto es, 65 millones de dólares de Hong Kong menos que los inicialmente previstos. En vista del programa de desembolsos de capital para escuelas, servicios médicos y planes de carreteras y aprovechamiento de tierras, se estima para el año 1964-1965 un déficit de 114 millones de dólares de Hong Kong.

Condiciones sociales

Fuerza de trabajo

16. Se estimó que más de una tercera parte del millón y medio de personas ocupadas en Hong Kong trabaja en las industrias manufactureras. Las declaraciones enviadas en 1964 al Departamento del Trabajo indican que el número de fábricas registradas o inscritas denotaba un ligero descenso de 8.348 en 1963 a 8.215 en 1964. El número de personas empleadas en esas fábricas ascendía a 350.174, o sea una disminución de 4.220 con respecto al año anterior. Las declaraciones al Departamento del Trabajo son voluntarias y no incluyen los trabajadores a domicilio ni las personas ocupadas en la industria doméstica, la industria de la construcción, o en la agricultura y la pesquería. La industria textil, que emplea a 148.264 personas, siguió siendo el principal empleador de fuerza de trabajo. La industria de plásticos, en la que se sabe hay un gran número de trabajadores a domicilio, siguió ampliándose como el segundo empleador de fuerza de trabajo en orden de importancia.

17. Los salarios y sueldos continuaron aumentando. Se estima que los salarios industriales se elevaron en 50% durante los años 1960-1965. Los funcionarios públicos recibieron en 1964, como aguinaldo provisional, un aumento de 5% del sueldo junto con un subsidio por persona a cargo. Se pensaba designar una Comisión de Sueldos para que estudiara las remuneraciones teniendo en cuenta el índice de precios de consumo de 1965. Los funcionarios públicos subalternos y no calificados que habían recibido aumentos que fluctuaban entre 11% y 14% en 1963 obtuvieron otros nuevos equivalentes a 15% de sus actuales salarios. Las fuerzas armadas concedieron un incremento de salarios que oscilaba del 10% al 29% a sus empleados industriales. Estas

alzas propendían a que el nivel de salarios del personal industrial localmente contratado por los departamentos de dichas fuerzas se equiparara al de los trabajadores de compañías de servicios públicos que recibieron aumentos en 1963.

Salud pública

18. El número de camas de hospital disponibles aumentó de 11.719 en 1963 a 11.989 en 1964. Esta última cifra incluye las maternidades y sanatorios, pero no abarca las instituciones mantenidas por las fuerzas armadas. De estas camas, 10.037 estaban en hospitales públicos y en instituciones y hospitales subvencionados por el Gobierno, mientras que las 1.952 restantes eran suministradas por organismos privados. Fuera de las camas reservadas para la atención de enfermos mentales y el tratamiento de la tuberculosis y enfermedades infecciosas, había 8.440 camas disponibles para todos los casos generales, con inclusión de los de maternidad. El número de médicos oficiales aumentó de 474 en 1963 a 515 en 1964. Los cirujanos dentales oficiales ascendían a 48, o sea un aumento de dos con relación al año precedente.

19. Los nacimientos, que alcanzaron a 115.263 en el año 1963, bajaron a 108.518 en 1964. La tasa de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes bajó de 32,1 en 1963 a 29,4. La tasa de mortalidad infantil descendió de 32,9 a 26,4 por 1.000 nacidos vivos en 1964. Los gastos previstos del Departamento de Servicios Médicos y Sanitarios para el ejercicio financiero de 1964-1965 alcanzaban a 93.400.300 dólares de Hong Kong. Se pagó a las organizaciones privadas una suma estimada en 32.418.400 dólares de Hong Kong por concepto de subsidios médicos. El gasto estimado global del De-

partamento de Servicios Médicos y Sanitarios representó el 8,41% de todos los gastos previstos del Territorio, que ascendían a 1.496.032.510 dólares de Hong Kong.

Situación de la enseñanza

20. La matrícula escolar en Hong Kong el 30 de septiembre de 1964 era como sigue: jardines de infantes, 39.642; escuelas primarias, 596.971; escuelas secundarias, 177.680; escuelas postsecundarias, 5.926; enseñanza de adultos, 32.969; y enseñanza especial, 1.011. Había 854.279 alumnos matriculados en todas las escuelas, colegios y centros de enseñanza, o sea 43.647 más que en 1963.

21. En 1964 el número de maestros con horario completo o parcial ocupados en escuelas diurnas registradas era de 24.329, de los cuales 6.685 eran graduados de universidades y 10.425 no graduados que habían recibido formación profesional. Otros 4.588 maestros se dedicaban a pasantías, clases vespertinas y especiales después de medio día, y 100 estaban ocupados en escuelas especiales. A fines del año escolar de 1963-1964, la relación entre alumnos y maestros de todos los tipos de escuelas era de 28:1, la misma relación que existía en el año escolar 1962-1963.

22. En septiembre de 1964 había 750 estudiantes de Hong Kong que cursaban estudios superiores en el Reino Unido. El número de esos estudiantes casi se ha duplicado desde 1960.

23. Los gastos de enseñanza para el año que terminó el 31 de julio de 1964 alcanzaban a 189.718.778 dólares de Hong Kong, lo que representaba un aumento de casi 25 millones de dólares de Hong Kong con respecto al año precedente.

CAPÍTULO XXII*

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS VIRGENES BRITANICAS, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, BARBADA, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS, ISLAS CAIMAN, ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS), HONDURAS BRITANICA

A. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL EN 1964 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS VIRGENES BRITANICAS, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, BARBADA, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS, E ISLAS CAIMAN

1. Las conclusiones y recomendaciones a que llegó el Comité Especial en 1964 con respecto a las Islas Virgenes de los Estados Unidos se encuentran en el informe que presentó a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1¹, cap. XXV, párrs. 313 a 321). Entre otras cosas, el Comité, habiendo tomado nota de las declaraciones de los representantes de la Potencia Administradora con respecto a una convención constituyente que habría de reunirse el 7 de diciembre de 1964, invitó a la Potencia

Administradora a velar porque la población del Territorio pudiera, libremente y sin restricción alguna, expresar su voluntad sobre el futuro estatuto político del Territorio. El Comité también expresó la esperanza de que la Potencia Administradora le suministraría todas las informaciones pertinentes relativas a las medidas que hubiera tomado en cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Además, el Comité invitó a la Potencia Administradora a transmitir a la Asamblea General informaciones referentes a las elecciones, la convención constituyente y las recomendaciones y acontecimientos resultantes, a fin de que la Asamblea pudiera adoptar decisiones adecuadas. A este fin, el Comité Especial recomendó que, en consulta con la Potencia Administradora, se enviara al Territorio una misión visitadora.

2. Las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones formuladas por el Comité Especial en 1964 con respecto a las Islas Virgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Barbada también se encuentran en el informe del Comité a la Asamblea

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.10.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

General en su decimonoveno período de sesiones (*ibid.*, párrs. 322 a 333). El Comité observó que estas islas parecían contar con elementos comunes suficientes, en las esferas política, económica y social, como para hacer posible alguna forma de unión entre algunas de ellas, si no entre todas. El Comité afirmó que parecía haber acuerdo general entre "las siete pequeñas" (Antigua, Dominica, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Barbada) con respecto a la independencia inmediata y la formación de algún tipo de federación. Señaló, sin embargo, que todavía se necesitaba un examen más completo, particularmente de las opiniones de los líderes de los territorios, y que toda la cuestión de la cantidad de asistencia que sería necesaria después de la independencia y de las diversas fuentes exteriores que podrían suministrarla merecía un estudio más completo.

3. En lo que se refiere a Granada, el Comité Especial tomó nota de que en ese momento se adelantaban negociaciones entre esa isla y Trinidad y Tabago con miras a una posible asociación entre ambas.

4. En cuanto a las Islas Vírgenes Británicas, parecían existir movimientos tendientes a mantenerlas fuera de la federación de las "siete pequeñas" y a estudiar, por el contrario, la posibilidad de una asociación con otros territorios vecinos.

5. En todos los casos, el Comité Especial invitó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a tomar medidas que aceleraran el proceso constitucional dentro del marco de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

6. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité Especial en 1964 respecto de las Bermudas, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán figuran en el informe del Comité a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (*ibid.*, cap. XXIV, párrs. 133 y 134). El Comité Especial, entre otras cosas, señaló que la Potencia Administradora no había mencionado ninguna medida concreta que hubiera adoptado o se hubiera propuesto adoptar en los territorios a fin de aplicar la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, e invitaba a la Potencia Administradora a que adoptara dichas medidas sin demora y, más especialmente, a que acelerara el proceso de libre determinación en las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán estableciendo en ellas órganos representativos. El Comité Especial estudió la posibilidad de enviar una misión visitadora a esos territorios a fin de obtener información suplementaria.

7. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea General, después de examinar los capítulos de los informes del Comité Especial relativos a esos territorios (A/5800/Rev.1, caps. XXIV y XXV; y A/6000/Rev.1², caps. XXIII y XXIV) aprobó la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965 en la cual, entre otras cosas, pedía a las Potencias administradoras que permitieran a las misiones de las Naciones Unidas visitar los territorios y les ofrecieran toda su coopera-

ción y asistencia; decidía que las Naciones Unidas debían prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesitasen en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación; y pedía al Comité Especial que examinara la situación de esos territorios e informase a la Asamblea General en el vigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.

ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)

8. Después de examinar la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) durante sus reuniones de 1964, el Comité Especial aprobó conclusiones y recomendaciones que están incluidas en el informe presentado a la Asamblea General durante su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXIII, párr. 59).

9. El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó la resolución 2065 (XX) relativa a las Islas Malvinas (Falkland Islands). Esta resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands),

"Teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho Territorio,

"Considerando que su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuentra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands),

"Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas,

"1. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands);

"2. Pide a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones."

² *Ibid.*, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa.

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRITORIOS³1. ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS⁴*Generalidades*

10. El 30 de junio de 1965 se calculó en 41.913 el número de habitantes; en 1963 era de 35.000.

Convención Constituyente

11. La primera Convención Constituyente de las Islas Vírgenes se abrió en Charlotte Amalie el 7 de diciembre de 1964. Terminó sus labores el 26 de febrero de 1965, fecha en que aprobó un proyecto de nueva Ley Orgánica para el Territorio.

12. De conformidad con la legislación de las Islas Vírgenes, la convención estuvo compuesta de veintidós delegados designados en una elección general que se celebró el 4 de noviembre de 1964 (cuatro delegados por Santa Cruz; cuatro por Santo Tomás, dos por San Juan y doce delegados de representación general) de los once senadores de las Islas Vírgenes.

13. La convención instituyó varios comités permanentes para facilitar su tarea y dispuso del asesoramiento de varios expertos en ciencia política, jurisconsultos y legisladores. La convención celebró audiencias públicas en tres de las principales poblaciones.

14. La Convención aprobó por unanimidad el proyecto de una nueva Ley Orgánica para el Territorio. A continuación se indican las principales reformas propuestas:

<i>Propuestas</i>	<i>Legislación actual</i>
i) Gobernador electivo; mandato de cuatro años.	Gobernador nombrado por el Presidente con consentimiento del Senado. Duración del mandato a discreción del Presidente.
ii) Gobernador adjunto electivo; mandato de cuatro años.	Secretario de Gobierno nombrado por el Presidente sin consentimiento del Senado. Duración del mandato a discreción del Presidente.
iii) Cuerpo legislativo unicameral de once senadores (tres por el distrito de Santa Cruz, tres por el de Santo Tomás, uno por el de San Juan y cuatro de representación general). Mandato de dos años. No se fijan limitaciones para la elección de los senadores de representación general.	Cuerpo legislativo unicameral de once senadores (dos por el distrito de Santa Cruz, dos por el de Santo Tomás, uno por el de San Juan, y seis de representación general). El electorado sólo puede votar por dos senadores de representación general y dos de cada distrito. El electorado de San Juan sólo puede votar por dos senadores de representación general y uno del distrito. Mandato de dos años.

³ En los informes del Comité Especial a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo aparece información sobre los Territorios (A/5800/Rev.1, caps. XXIII a XXVI; y A/6000/Rev.1, caps. XXII a XXV). La información que se consigna en esta sección complementa la de informes anteriores.

⁴ Los datos que figuran en esta sección proceden de informes publicados y de la información correspondiente al año que terminó el 30 de junio de 1964, transmitida al Secretario General por los Estados Unidos de América el 31 de agosto de 1965, en virtud de lo dispuesto en el inciso c del Artículo 73 de la Carta.

*Propuestas**Legislación actual*

- | | |
|--|--|
| iv) Comisionado Residente o Delegado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. | No hay disposición. |
| v) Derecho a votar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos. | No hay disposición. |
| vi) Derecho de voto a los residentes de 18 años o más. | 21 años o más. |
| vii) Abolición del derecho de veto del Presidente de los Estados Unidos respecto de las leyes locales. | El Presidente de los Estados Unidos tiene derecho de veto respecto de las leyes locales. |
| viii) Contralor nombrado por el Gobernador con el consentimiento del poder legislativo. Mandato de diez años. | Contralor nombrado por el Secretario del Interior de los Estados Unidos. Mandato de diez años. |
| ix) Las propuestas de modificación de la Ley Orgánica pueden ser presentadas por el cuerpo legislativo, o a éste por iniciativa popular, o por una convención constituyente. | No hay disposición. |

15. La Convención también aprobó, sobre la situación jurídica del Territorio, una resolución que dice lo siguiente:

“Queda resuelto que:

“1. El pueblo de las Islas Vírgenes se opone firmemente a que las Islas Vírgenes sean anexadas por un Estado de la Unión como condado, ciudad o circunscripción, o por un Territorio Asociado o cualquier otro Territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos;

“2. El pueblo de las Islas Vírgenes se opone firmemente a la independencia;

“3. El pueblo de las Islas Vírgenes desea que las Islas Vírgenes continúen siendo un Territorio no incorporado bajo el sistema constitucional de los Estados Unidos con la máxima autonomía interna y en la más estrecha asociación posible con los Estados Unidos de América, y que en adelante, se designe a las Islas Vírgenes como “territorio autónomo”;

“4. Se tomarán las necesarias disposiciones constitucionales a fin de que el pueblo de las Islas Vírgenes esté facultado para votar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos.”

Legislación

16. Se informa que han sido presentados al Congreso de los Estados Unidos varios proyectos de ley relativos a las propuestas formuladas por la Convención Constituyente. En mayo de 1966 la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley; en uno se disponía la elección de un Gobernador y de un Gobernador Adjunto, y en el otro se disponía una reforma electoral y se ampliaba de once a quince el número de miembros del cuerpo legislativo de las Islas Vírgenes. El proyecto de reforma de la ley electoral prevé la elección de cinco senadores por Santa Cruz, cinco por

Santo Tomás, uno por San Juan y cuatro senadores de representación general. En junio de 1966 el Subcomité de Asuntos Interiores e Insulares del Senado celebró audiencias sobre este proyecto de ley.

17. El 27 de julio de 1966 el Senado de los Estados Unidos aprobó sin oposición la reforma de la ley electoral de las Islas Vírgenes. Un orador dijo que se había incorporado a la ley una enmienda presentada en comité, en virtud de la cual la nueva legislación entraría en vigor a tiempo para las elecciones del 8 de noviembre de 1966. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes disponía que el 1º de enero de 1967 entraría en vigor la ley. En vista de esta discrepancia, se remitió nuevamente el proyecto a la Cámara de Representantes para que lo examinara en conferencia con el Senado.

18. Los adversarios de la entrada en vigor de la reforma electoral en 1966 han sostenido que no habrá tiempo suficiente para preparar satisfactoriamente los detalles de la elección. Han señalado que el Gobernador de las islas debe convocar un período de sesiones extraordinario del cuerpo legislativo para que estudie la reforma antes de las elecciones primarias, fijadas en el 13 de septiembre de 1966. También han criticado al Gobernador por insistir en una fecha tan próxima.

19. El 5 de agosto de 1966 el Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos designó a cinco miembros que representasen a la Cámara en una conferencia con el Senado sobre el proyecto de ley. El 10 de agosto de 1966 la conferencia de miembros del Senado y de la Cámara decidió hacer efectiva este año la reforma electoral.

20. Se ha convocado un período de sesiones extraordinario del cuerpo legislativo de las Islas Vírgenes para el 13 de agosto de 1966, con objeto de modificar la fecha de las elecciones primarias, aplazándola del 13 de septiembre al 4 de octubre de 1966.

21. El Senado de los Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley que dispone la designación de Gobernador por elecciones.

Condiciones económicas

22. En 1964, la industria turística alcanzó el volumen de 48 millones de dólares, en comparación con 41 millones en 1963 y 35 millones en 1962. Se concedieron permisos a nuevas industrias que trabajan para el comercio de exportación, incluyendo el montaje de relojes, la fabricación de fibra de vidrio, productos farmacéuticos, prendas deportivas, equipo eléctrico y bisería. También se establecieron tres industrias que sirven al comercio local.

23. Una sequía severa y prolongada afectó a la agricultura durante el primer semestre de 1964. A pesar de la sequía, algunos sectores de la agricultura registraron apreciables aumentos de producción. En Santa Cruz se logró la mayor cosecha de azúcar hasta la fecha gracias a las excelentes lluvias. Se produjo un total de 15.540 toneladas de azúcar sin refinar, en comparación con 15.354 en 1963.

24. El ingreso per cápita se calculó en 1.761 dólares en 1964, en comparación con 1.543 dólares en 1963. La cifra actual es poco menos del doble de la de 1959, en que el ingreso per cápita fue de 986 dólares.

25. Las importaciones del territorio continental de los Estados Unidos, y del extranjero en general, alcanzaron un máximo de 76 millones de dólares, en 1963, en comparación con 61.800.000 dólares en 1962. Las exportaciones de productos de las Islas Vírgenes al territorio continental de los Estados Unidos y a otros países llegaron a 22.600.000 dólares en total en 1963, en comparación con unos 20 millones en 1962.

26. Los ingresos locales y los correspondientes a la aportación paralela, sumados, ascendieron en 1964 a 25.600.000 dólares para necesidades de explotación y de capital, en comparación con 19.700.000 dólares en 1963. El fondo de aportación paralela correspondiente a los ingresos procedentes de los recursos propios ascendió a 8.400.000 en comparación con 7.600.000 dólares en 1963.

Condiciones sociales

Mano de obra

27. En 1964, el número de empleos no agrícolas ascendió a 1.402. A continuación se da la distribución relativa a los grupos principales de ocupaciones y de la certificación de nacionales de otros países para empleos no agrícolas, correspondientes a 1963 y 1964:

	<i>Puestos</i>		<i>Nacionales de otros países</i>	
	1963	1964	1963	1964
<i>Grupos de ocupaciones</i>				
Profesionales, administrativos y de oficina	325	317	140	269
Servicios	448	466	5.300	6.644
Calificados y semicalificados	363	382	2.687	3.369
No calificados y otros	314	237	5.222	5.734
TOTAL	1.450	1.402	13.349	16.016

Sanidad

28. El estado sanitario de la población siguió siendo excelente en 1964. No hubo epidemias y prosiguió la ejecución de programas de inmunización en masa para la prevención de enfermedades. En 1963 se registraron 1.513 nacidos vivos, en total, en comparación con 1.375 en 1962, y la tasa de mortalidad ascendió al 10 por 1.000, en comparación con el 9 por 1.000 en 1962.

29. En 1964, el Departamento de Sanidad tomó las primeras medidas concretas del programa para crear centros sanitarios, que costarán varios millones de dólares, en Santo Tomás y en Santa Cruz. El primer paso consiste en el trazado preliminar, que bastará para que todo el programa se base en presupuestos y plazos exactos. El proyecto comprende dos hospitales generales de 250 camas cada uno; dos hospitales de 60 a 75 camas para estancias prolongadas, dos clínicas sanitarias, una escuela de enfermeras y una residencia de estudiantes de enfermería.

Situación de la enseñanza

30. En 1964, el número de alumnos de las escuelas públicas fue de 8.671 en comparación con 8.201 en 1963. La necesidad de contar con más aulas se satisfizo, en

parte, por la adición de 20 aulas de primera enseñanza y 14 de segunda enseñanza. Además, se habilitaron un nuevo gimnasio, un nuevo salón de música y cuatro talleres de formación profesional en el establecimiento de segunda enseñanza de Charlotte Amalie, y en Santa Cruz se hallan en construcción instalaciones semejantes.

31. En el Colegio Universitario de las Islas Vírgenes se dio fin, con buen éxito, en 1964, al primer curso académico. Parece que el número de estudiantes se duplicará porque se proyecta matricular hasta 100 alumnos oficiales y más de 400 alumnos libres en el segundo año.

2. ISLAS VIRGENES BRITANICAS⁵

Generalidades

32. En 1963, la población de las Islas se calculaba en 7.400 habitantes.

Acontecimientos políticos y constitucionales

Informe del Comisionado Constitucional correspondiente a 1965

33. En un informe del Comisionado Constitucional, que apareció el 12 de agosto de 1965, se recomienda la aprobación de una nueva constitución, que permita a las Islas Vírgenes Británicas avanzar paulatinamente hacia la libre determinación. Redactó el informe la Dra. Mary Proudfoot, miembro del Somerville College, de Oxford. En el informe se consignan observaciones críticas respecto al régimen actual, en que un administrador preside el Consejo Ejecutivo y el Consejo Legislativo, sin que haya sistema ministerial. "Parece que no se sabe casi, en ninguna esfera de gobierno, que la finalidad de todo el régimen consiste en servir al pueblo — escribe la Dra. Proudfoot —; creo que una de las principales razones del actual descontento consiste en que el Gobierno no tiene mucha relación con el pueblo."

34. En el informe se recomienda que se constituya un grupo de tres ministros, tomados de los siete miembros electivos del Consejo Legislativo. Los miembros electivos nombrarán Primer Ministro a uno de ellos. El Presidente nombrará entonces a los otros dos ministros. Los tres ministros se encargarán del gobierno, fuera de los asuntos que aún correspondan al Administrador. El Administrador seguirá ocupándose, en particular, de asuntos económicos y financieros.

35. Se sugiere que este plan permitiría estudiar la evolución hacia la libre determinación, proceso en que el Primer Ministro y sus dos colegas asumirán paulatinamente más funciones y obligaciones, y el Administrador y los funcionarios se relegarán a segundo plano. El asunto de la nueva constitución está aún en discusión.

36. El Consejo Legislativo debatió en octubre de 1965 el informe del Comisionado Constitucional. Al término del debate, el Consejo aprobó por unanimidad la siguiente resolución:

⁵ Los datos que figuran en esta sección proceden de informes publicados y de la información correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 1964, transmitida al Secretario General por el Reino Unido el 25 de agosto de 1965, en virtud de lo dispuesto en el inciso e del Artículo 73 de la Carta.

"El Consejo toma nota del informe presentado por el Comisionado Constitucional (Dra. Proudfoot) y pide al Secretario de Estado para las Colonias que dé audiencia a una delegación de este Consejo con objeto de redactar una nueva constitución para el Territorio basada en dicho informe, con sujeción a determinadas modificaciones que expondrá detalladamente la delegación."

37. Subsiguientemente, el Reino Unido propuso que se celebrara en Londres una conferencia constituyente que se inauguraría el 3 de octubre de 1966. En mayo de ese año, el Gobierno de las Islas Vírgenes se adhirió a esa propuesta.

Administración pública

38. El funcionario de desarrollo de la comunidad reanudó sus tareas después de seguir un curso de un año en el Instituto de Enseñanza de una universidad de ultramar, y a un secretario administrativo se le concedió licencia para cursar estudios en el exterior. En 1964 había seis funcionarios de ultramar en la administración pública y doce funcionarios locales que ocupaban puestos de categoría y grado comparables a los de los funcionarios de ultramar.

Condiciones económicas

39. Los ingresos y los gastos públicos del período de 1962 a 1964 fueron los siguientes:

Año	Ingresos	Gastos
	(En dólares de los EE. UU.)	
1962	343.617	899.011
1963	574.212	947.347
1964	613.262	873.581

40. En 1964, hubo una gran sequía, y por esta razón no hay estadísticas sobre cultivos, productos forestales, ganado y pesca.

Condiciones sociales

Sanidad

41. En 1964 se cubrieron las dos vacantes de personal médico, pero siguen siendo problema las vacantes de enfermeras. En el personal de servicios médicos, de 1964, había dos médicos con título, cinco enfermeras de capacitación superior, 13 enfermeras diplomadas, nueve enfermeras con capacitación parcial (comprendidas, entre éstas, alumnas de estudios de enfermería), cuatro parteras de capacitación superior, cinco parteras con certificado, ocho parteras con estudios parciales (incluidas entre éstas las que practican en hospital), un inspector sanitario, un técnico de laboratorio y rayos X, un técnico ayudante de laboratorio y un farmacéutico.

42. En 1964, el gasto público en servicios médicos y sanitarios fue de 96.358 dólares, en comparación con 79.187 dólares en 1963.

Situación de la enseñanza

43. Los gastos del Gobierno en enseñanza, con inclusión de las subvenciones a instituciones fuera del Territorio, ascendieron a 152.103 dólares en 1964, en comparación con 155.265 dólares en 1963.

3. ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA Y SAN VICENTE

Generalidades

Propuestas constitucionales

44. El 12 de noviembre de 1965 se preguntó en la Cámara de los Comunes al Secretario para las Colonias si podía hacer una declaración sobre el porvenir constitucional de las islas del Caribe oriental. El Secretario para las Colonias respondió que en los últimos meses la mayoría de los Gobiernos de las Islas Leeward y Windward habían presentado solicitudes donde se pedían cambios constitucionales. Estas habían sido cuidadosamente consideradas por el Gobierno del Reino Unido y, como resultado, el Secretario había presentado ciertas sugerencias a los Gobiernos, que éstos estaban examinando. También había pedido a Sir Stephen Luke, a quien acompañaría un asesor jurídico, que visitara los Territorios en su nombre para celebrar conversaciones privadas con los Gobiernos. El Secretario para las Colonias esperaba poder hacer una declaración más completa sobre este tema después de esa visita.

45. Sir Stephen Luke y el Sr. de Winton, asesor jurídico, visitaron primero a Antigua, en las Islas Leeward, y luego a San Cristóbal, Montserrat, Dominica, Santa Lucía y San Vicente. La visita se realizó a fines de 1965.

46. En un Libro Blanco publicado por el Ministerio de Colonias el 30 de diciembre de 1965 se propuso para las seis islas y grupos de islas del Caribe oriental la nueva condición jurídica constitucional que se denominaría "Estados en asociación con Gran Bretaña".

47. La nueva asociación comprendía sólo las cuatro Islas Windward, Santa Lucía, San Vicente, Dominica y Granada, y dos de las Islas Leeward, Antigua y San Cristóbal-Nieves-Anguila. Se decidió que los cambios constitucionales para el Territorio mucho más pequeño de Montserrat se considerarían por separado.

48. En virtud de las disposiciones constitucionales, cada Territorio se convertiría en un Estado en asociación con el Reino Unido, con el control de sus asuntos internos y con el derecho de modificar su propia constitución, incluso la facultad de poner término a dicha asociación y declararse independiente. Estas enmiendas constitucionales necesitarían una mayoría de dos tercios en la legislación y una mayoría de dos tercios del total de los votos en un referéndum.

49. Mientras los Territorios continúen siendo Estados en asociación con el Reino Unido, el Gobierno de ese país aceptará la responsabilidad de sus relaciones exteriores y su defensa, y el Parlamento del Reino Unido y la Reina en Consejo tendrán autoridad legislativa para el desempeño de su responsabilidad. Aparte de estos poderes y responsabilidades y de los poderes relacionados con la aplicación en los Territorios de las leyes sobre la nacionalidad británica, el Gobierno del Reino Unido no tendrá autoridad para legislar con respecto a los Territorios sin su consentimiento y no tendrá ninguna responsabilidad en la conducción de sus asuntos.

50. El jefe del poder ejecutivo del gobierno será el Representante de la Reina, nombrado por un término de cinco años por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para las Colonias, quien sería aconsejado por el Ministro principal (o Primer Ministro) interesado.

Un representante del Gobierno del Reino Unido en la región sería responsable de la conducción de las relaciones entre el Reino Unido y los Territorios.

51. En las constituciones de los Territorios se inscribirán garantías para la preservación de las formas democráticas de gobierno y para la protección de los derechos fundamentales. Se establecerá una Corte Suprema para todos los Territorios, cuyas funciones incluirán el control de la observancia y la interpretación de las constituciones. El Presidente de la Corte será nombrado por el Lord Canciller. La ciudadanía seguirá regida por las leyes británicas sobre nacionalidad, a menos que un Territorio establezca una ciudadanía separada.

52. Los Territorios continuarían siendo elegibles para recibir ayuda británica, incluso asistencia presupuestaria. Estas disposiciones, si fuesen aceptadas, constituirían la base a partir de la cual podrían considerarse formas nuevas de cooperación regional, ya fuese entre los mismos Territorios o con las islas vecinas.

53. Subsiguientemente, se preguntó en la Cámara de los Comunes al Secretario para las Colonias, el 27 de enero de 1966, qué respuesta de los Gobiernos de las islas del Caribe oriental a las propuestas presentadas de asociación con el Reino Unido había recibido el Gobierno británico. Un portavoz del Secretario para las Colonias respondió que se creía que las propuestas eran aceptables en general como base de discusión y que hasta el momento se había recibido respuesta sólo del Gobierno de Antigua.

54. El 31 de enero de 1966 el Ministro Principal de San Vicente declaró, al volver de la reunión de Ministros Principales celebrada en Santa Lucía, que todos los Ministros Principales estaban unidos en sus demandas relacionadas con las propuestas constitucionales para las Islas Leeward y Windward. Expresó que presentarían un frente unido al Ministerio de Colonias cuando próximamente se reuniera la conferencia en Londres.

Conferencias constitucionales

55. Del 28 de febrero al 26 de mayo de 1966 se celebró en Londres una serie de conferencias constitucionales sobre seis de estos Territorios (el cambio constitucional en Montserrat se ha de examinar por separado), en la forma siguiente:

Antigua, del 28 de febrero al 25 de marzo de 1966;

Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente, del 18 de abril al 6 de mayo de 1966;

San Cristóbal-Nieves-Anguila, del 12 al 26 de mayo de 1966.

56. Se informa que se llegó a un acuerdo sobre el nuevo estatuto constitucional de asociación con el Reino Unido que se bosqueja en las propuestas constitucionales publicadas en diciembre de 1965.

57. Según se informa, al terminar la última conferencia el Secretario de Estado para las Colonias, señor Frederick Lee, declaró que esperaba que las nuevas disposiciones constitucionales entrasen en vigor "a fines de año".

58. A continuación se exponen los comentarios que se dice hicieron algunos de los participantes principales en cada una de las conferencias. Después de los comentarios se hace un breve resumen de los principales acuerdos logrados.

*Comentarios sobre las conferencias**Conferencia sobre Antigua*

59. Antigua fue la primera de las islas del Caribe oriental que discutió la nueva relación propuesta con Gran Bretaña, como "Estado asociado" (véanse párrs. 46 a 54 *supra*). El 28 de febrero de 1966 se inauguró en Londres una conferencia constitucional bajo la presidencia de Lord Longford, Secretario de Estado para los Asuntos Coloniales. La delegación de Antigua estaba encabezada por el Primer Ministro de la isla, Sr. V. C. Bird. Se anunció que los otros miembros de la Conferencia incluirán al Administrador, Sr. David Rose, así como a otros altos funcionarios del Gobierno, de la industria y de la mano de obra en el Territorio.

60. Al iniciarse la Conferencia, el Secretario de Estado para los Asuntos Coloniales expresó que ciertos Territorios de ultramar de Gran Bretaña, aunque capaces de hacerse cargo de las funciones internas normales del gobierno, no poseían al presente los recursos humanos y monetarios necesarios para administrar su propia defensa y sus asuntos exteriores. En estas circunstancias, Gran Bretaña estaba dispuesta a considerar la continuación de su manejo de la defensa y las relaciones exteriores, siempre que pudiese tener las facultades adecuadas y la seguridad de que el Territorio trataría de mantener en todo momento un tipo de gobierno constitucional y de imperio de la ley similar a los existentes en Gran Bretaña.

61. Según se informa, al terminar la Conferencia el entonces Secretario de Estado para las Colonias, Lord Longford, dijo:

"Teníamos que idear un nuevo tipo de relación entre Gran Bretaña y Antigua. Los dos países están muy alejados geográficamente y tienen dimensiones y responsabilidades muy diferentes, pero pese a ello están unidos por vínculos estrechos que se forjaron a lo largo de tres siglos de historia. Queríamos idear una relación no colonial en la que Antigua disfrutara de plena autonomía interna, mientras que la Gran Bretaña se ocuparía de las relaciones exteriores y la defensa. Las disposiciones para esta relación tenían que ser justas para ambas partes. Tenía que ser una relación en la que el pueblo de Antigua pudiese participar con dignidad y cordialidad, al propio tiempo que se hiciera cargo de tareas que guardasen proporción con sus dimensiones y con el volumen de sus recursos. También tenía que ser una relación en la que Gran Bretaña pudiese mantener convenientemente las responsabilidades que iba a contraer. Nuestras instituciones comunes — el respeto de la legalidad, la libertad del individuo y las instituciones de la democracia parlamentaria — han sido los cimientos sobre los que se ha construido el nuevo acuerdo. Si así lo desean el pueblo y el Gobierno de Antigua, no hay ningún motivo para que esa relación no dure todo el tiempo que existan esos cimientos. Naturalmente, para que se desarrolle con éxito necesitará la mutua comprensión y buena voluntad que, estoy seguro, aportarán ambas partes."

62. Según se informa, el Sr. V. C. Bird, Ministro Principal de Antigua, dijo:

"Hemos estado estudiando esta nueva relación, entre el Reino Unido y nosotros, en la que habrá libre asociación. Al cabo de meses de estudio de la forma que debería adoptar esta nueva relación, hemos elab-

orado lo que creo será una constitución satisfactoria. Esta nueva constitución dará a nuestro pueblo el derecho a dirigir sus propios asuntos a escala local, acordando que la Gran Bretaña se ocupará de las cuestiones de relaciones exteriores y defensa, pero en la base de todo ello está el derecho de libertad para el pueblo, porque el propio pueblo de Antigua tendrá el derecho de declarar su independencia en el momento en que desee hacerlo. Creo que con ese derecho de revocación podemos decir bien a todo el mundo, y al pueblo de nuestra patria, que estamos satisfechos con la solución que hemos encontrado. La nueva constitución debe hacer que nuestro pueblo sienta que es libre y que tiene en sus manos las riendas de su destino."

Conferencia sobre Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente

63. Se informó que al inaugurarse la Conferencia el Sr. H. Blaize, Ministro Principal de Granada, declaró que esperaba tratar de la economía y el comercio, así como de las cuestiones constitucionales. Añadió que los proyectados Territorios asociados no florecerían y crecerían con tan sólo el ejercicio constitucional.

64. El 29 de abril se informó que las conversaciones parecían estar "atascadas", ya que el Secretario de Estado para las Colonias, Sr. Frederick Lee, no parecía dispuesto a satisfacer las garantías de inmigración y comercio. El Ministro Principal de Granada, Sr. H. Blaize, había pedido encarecidamente que se crease en el Reino Unido un consejo para fomentar las inversiones en las islas. Sir Garnet Gordon, de Santa Lucía, el Sr. Keith Alleyne, de Dominica, y el Sr. Ebenezer Joshua habían subrayado la necesidad de crear industrias ligeras para ayudar a sus Territorios a hacer frente a las crecientes presiones sociales y económicas.

65. Según las informaciones, varios delegados estaban contrariados por no haber logrado ninguna ayuda financiera de importancia del Reino Unido. Se dijo que el Secretario de Estado para las Colonias había prometido ocuparse de la cuestión del aumento de la ayuda económica a las islas más adelante.

66. Durante la Conferencia se celebraron reuniones por separado con cada delegación para examinar las propuestas de constitución interna formuladas por los Gobiernos de los Territorios. En los párrafos siguientes se describen los aspectos principales de cada constitución.

Conferencia sobre San Cristóbal-Nieves-Anguila

67. Se informó que, al inaugurarse la Conferencia, el Ministro Principal de San Cristóbal, señor Paul Southwell, dijo que su delegación deseaba que el nuevo estatuto de asociación se revisase cada cuatro años. También pidió encarecidamente al Reino Unido que hiciese más para elevar el nivel de vida y el desarrollo económico de la Colonia. Sugirió que se crease un subcomité económico que colaborase con la conferencia constitucional.

68. Según las informaciones, al terminar la Conferencia el Ministro Principal dijo que el acuerdo era el mejor que se podía haber obtenido en aquellas circunstancias. Pero añadió que el acuerdo no daba "plenos motivos de alegría". Las islas lo habían aceptado "sin excesivo entusiasmo porque éramos partidarios,

y aún lo somos, de una gran nación de las Indias Occidentales en el Caribe”.

Principales características de las nuevas disposiciones

Generalidades

69. Según los términos de las nuevas disposiciones convenidas en las conferencias constitucionales, cada Territorio tendrá absoluto control sobre los asuntos internos, mientras que el Reino Unido conservará las atribuciones sobre las relaciones exteriores y la defensa. Cada Territorio tendrá plenos poderes para enmendar su Constitución, con inclusión de la facultad para poner término a la asociación con el Reino Unido y declararse independiente. A continuación figura un resumen de las disposiciones pertinentes.

Relaciones exteriores y defensa

70. Todos los gobiernos convinieron en que el Gobierno del Reino Unido ha de actuar en estrecha colaboración con los gobiernos de los Estados asociados en los asuntos que afecten a sus Territorios en cuanto a defensa y relaciones exteriores, y que el Gobierno del Reino Unido puede conferir al gobierno de un Estado asociado la autoridad necesaria para ocuparse de asuntos concretos de relaciones exteriores y defensa. Se convino además en que los gobiernos de los Territorios proporcionarán los servicios de defensa que necesita el Reino Unido; que sin el consentimiento de Gran Bretaña no concederán acceso a sus territorios a ningún otro gobierno; y que no utilizarán las fuerzas del Reino Unido para asistencia al poder civil.

71. En lo relativo a relaciones exteriores, el Reino Unido y los Gobiernos de Antigua, San Vicente, Granada y Dominica convinieron en que el Reino Unido consultará con los gobiernos respectivos antes de contraer obligaciones internacionales que les afecten, en que los tres Territorios dictarán las leyes necesarias, y en que se mantendrá entre los gobiernos un completo sistema de consultas. Todos los gobiernos convinieron en que el Reino Unido autorizará a cada Territorio, a condición de que ello no signifique conflicto con las responsabilidades del Gobierno del Reino Unido, a solicitar su admisión en los organismos especializados de las Naciones Unidas; a firmar acuerdos de interés local con los demás Estados del Commonwealth en el Caribe; a aceptar asistencia financiera y técnica del Commonwealth, de los Estados Unidos de América o de organizaciones internacionales de que sea miembro el Reino Unido, y a concertar acuerdos de migración con otros países.

Término de la asociación

72. El procedimiento para poner término a la asociación, a la que tanto el Reino Unido como los Territorios podrían proceder libremente en cualquier momento, exige la aprobación de una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento, y una mayoría de dos tercios de votos en caso de referéndum. No se necesitará referéndum, sin embargo, en el caso de que se ponga término a la asociación con el fin de unirse a un país independiente del Commonwealth en el Caribe, ya sea en forma de unión, federación o asociación. A los delegados a la Conferencia de Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente, que expresaron aprensiones acerca de la posibilidad de que el Reino Unido hiciese

uso arbitrario de la facultad de poner término a la asociación, se les aseguró que el Reino Unido daría notificación previa de seis meses del propósito de poner término a la asociación, que pediría la aprobación del Parlamento del Reino Unido antes de hacerlo y que estaría también dispuesto a celebrar una conferencia para el examen del término de la asociación.

Disposiciones constitucionales

73. En la Conferencia se elaboraron constituciones para cada Territorio por separado. En ellas se prevén parlamentos que, en el caso de Dominica, Santa Lucía y San Vicente, consistirán en una Cámara (con 10, 11 y 13 miembros elegidos, respectivamente, tres miembros nombrados y un miembro *ex officio*) y, en los casos de Antigua y Granada, estarán compuestos por una Cámara Alta y una Cámara Baja. La reforma de la Constitución sólo puede realizarse en el Territorio interesado, y exigirá la aprobación por dos tercios de los miembros del Parlamento, o por dos tercios del electorado cuando se trate de disposiciones básicas de la Constitución, tales como las relativas a las libertades fundamentales o a la estructura del Parlamento. Estos parlamentos se renovarán cada cinco años.

Poder Judicial

74. Los gobiernos deberán participar en una Corte Suprema de Justicia cuya jurisdicción podrá extenderse a otros territorios interesados de la región. La Corte tendrá jurisdicción, entre otras materias, sobre las siguientes: derechos y libertades fundamentales, composición de los parlamentos y conflictos entre partes de la Constitución de cada Estado. La jurisdicción de la Corte Suprema la determinarán los parlamentos de los Territorios respectivos.

Nacionalidad

75. Como hasta ahora, la nacionalidad de los respectivos Territorios será la misma que la del Reino Unido y las Colonias. Sin embargo, en el caso en que se pudiese término a la asociación, entrará en vigor la nacionalidad separada para cada Territorio, prevista en cada Constitución, y será aplicada a las personas nacidas en el Territorio, cuyo padre es ciudadano del Territorio, y a las mujeres casadas con ciudadanos del Territorio.

Asistencia económica

76. En la Conferencia de Antigua se convino en que después que entrasen en vigor las nuevas disposiciones constitucionales Antigua podría seguir recibiendo asistencia británica. Los subsidios, préstamos y subsidios de investigación concedidos desde 1946 a 1965 a Antigua por los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial ascendieron a 2.400.000 libras esterlinas, además de lo cual Antigua recibió asistencia técnica, préstamos del Exchequer y fondos de la Commonwealth Development Corporation.

77. A principios de la Conferencia sobre Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente todos los delegados instaron a la delegación del Reino Unido a que diese garantías de que la nueva condición jurídica constitucional no significará un desmejoramiento en la situación de las islas con respecto al comercio, ayuda e inmigración. La delegación del Reino Unido declaró que debido a otras obligaciones y que hacía poco la

asistencia se había aumentado en las cuatro islas a más o menos seis libras anuales per cápita, no sería posible aumentar la asistencia financiera, pero que se procuraría invertirla en forma más eficaz. Agregó que se cumplirían en su totalidad las promesas ya hechas de asistencia y que, en caso necesario, se aseguraría una asistencia presupuestaria. (En 1965, de las cuatro islas sólo Santa Lucía no necesitó de asistencia presupuestaria.) En lo relativo al comercio y a la migración la delegación del Reino Unido explicó que la nueva condición constitucional no alteraría la actual estructura comercial, y que el Gobierno del Reino Unido no podía ofrecer trato especialmente favorable a los emigrantes de los Estados asociados con respecto a los demás migrantes del Commonwealth.

Cooperación regional

78. En conformidad con la propuesta del Libro Blanco de diciembre de 1965, los Gobiernos expresaron que estaban dispuestos a analizar a fines de 1966 la cuestión de la futura cooperación regional entre sí y con los demás Territorios de la región.

Entrada en vigor

79. Las nuevas disposiciones concertadas en las Conferencias están sujetas a la aprobación de cada uno de los parlamentos territoriales y a la promulgación de las leyes necesarias por el Parlamento del Reino Unido. Conviene señalar, a este respecto, que se celebraron elecciones legislativas territoriales en Granada en septiembre de 1962, en Santa Lucía en junio de 1965, en Antigua en noviembre de 1965, y en Dominica en enero de 1966. El 25 de julio de 1966 se celebraron elecciones en San Cristóbal-Nieves-Anguila y en ellas triunfó el partido del Gobierno. En agosto de 1966 deberán celebrarse elecciones en San Vicente.

ANTIGUA⁶

Generalidades

80. En 1963 se calculaba la población en 61.664 habitantes.

Evolución política y constitucional

Elecciones

81. Los habitantes de Antigua votaron el 29 de noviembre de 1965 para elegir a diez de los 25 candidatos presentados. Los dos principales partidos opuestos en la elección fueron el Antigua Labour Party (ALP), encabezado por el Ministro principal Sr. Vere Bird, que controlaba la totalidad de los 10 asientos de la última Cámara, y el Antigua-Barbada Democratic Movement (ABDM) dirigido por un propietario de bienes raíces, el Dr. Robert Hall. También se presentaron cinco independientes a la elección. El Antigua Labour Party volvió al poder después de conquistar la totalidad de los siete distritos electorales disputados en la elección general. En la vehemente campaña electoral, el partido victorioso insistió sobre la "independencia para Antigua siguiendo el ejemplo de las Islas Cook".

⁶La información sobre Antigua ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 24 de agosto de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

Administración pública

82. En 1964 se dictó un curso de formación en el empleo para funcionarios superiores sobre aspectos de la administración pública. A fines de 1964 había 10 funcionarios de ultramar prestando servicios (cinco con derecho a pensión y cinco bajo contrato), en comparación con 50 funcionarios superiores locales. El número total de funcionarios locales de todas las categorías (con exclusión del personal a jornal) ascendía a 1.468.

Condiciones económicas

83. La economía del país continúa fundándose en la agricultura, con el azúcar y el algodón como principales exportaciones. El turismo adquiere importancia creciente.

84. En el período 1962-1964, el comercio total de Antigua, San Cristóbal y Montserrat con el Reino Unido (cifras de la Cámara de Comercio británica, en libras esterlinas) fue como sigue:

	1962	1963	1964*
Importaciones del Reino Unido	1.247.320	3.635.925	2.866.717
Exportaciones del Reino Unido	2.245.393	2.049.415	2.439.222
Reexportaciones del Reino Unido	33.043	27.165	22.478

* Incluye las Islas Vírgenes Británicas.

85. En 1964, el cálculo de ingresos locales, derivados principalmente de los derechos de aduana y de impuestos internos sobre los réditos ascendió a 10.231.191 dólares I O. Además, el Territorio recibió 24.168 dólares I O del plan de ayuda a los servicios de ultramar, 94.897 dólares I O de los planes de Desarrollo y Bienestar Colonial y 89.740 dólares I O de otras fuentes, lo que llevó el ingreso total calculado a 10.439.996 dólares I O, en comparación con 11.600.000 dólares I O en 1963⁷.

Zona de Libre Comercio del Caribe

86. Un acuerdo sobre libre comercio para Antigua, Barbada y la Guayana Británica fue firmado en Antigua el 15 de diciembre de 1965 por los Primeros Ministros de Barbada y de la Guayana Británica, Sr. Errol Barrow y Sr. Forbes Burnham, y por el Ministro Principal de Antigua, Sr. V. C. Bird. El más importante de los 37 artículos de la Convención elimina todos los derechos de importación sobre las mercaderías que se consideren fabricadas en los Territorios participantes. La Convención debe ser aplicada por las legislaturas interesadas. Luego podrá ser presentada para su registro en las Naciones Unidas y en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Se espera que más territorios convengan en ser partes en el acuerdo.

Condiciones sociales

Sanidad

87. El Servicio Médico del Gobierno consistía en 1964 de 15 médicos registrados, seis enfermeras supe-

⁷La unidad monetaria en Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Barbada es el dólar de las Indias Occidentales (dólar I O) que equivale a 4 chelines y 2 peniques (libra esterlina) o sea a 0,5833 de dólar de los Estados Unidos.

riores, cuatro parteras superiores, 64 parteras diplomadas, 20 inspectores sanitarios, tres técnicos de laboratorio y rayos X y siete farmacéuticos. Se contaba con un hospital general con 180 camas, un hospital rural con 150 camas y un hospital para enfermedades mentales con 200 camas.

88. En 1964, los gastos recurrentes del Departamento Sanitario y del Departamento Médico ascendieron a 1.334.095 dólares I O.

Situación de la enseñanza

89. En 1964, el número de niños que recibían enseñanza primaria era de 11.614, en comparación con 13.450 en 1963.

90. La actividad más urgente para mejorar la enseñanza primaria sería un programa de reconstrucción destinado a reemplazar las actuales instalaciones escolares de las zonas rurales, que son inadecuadas. Se espera reemplazar en un futuro próximo los edificios escolares en ocho aldeas.

91. Para mejorar la proporción alumno/maestro, el Gobierno de Antigua se dispone a aumentar la contratación de maestros de escuela primaria y a ampliar el programa existente de formación de maestros.

DOMINICA⁸

Generalidades

92. En 1963 el cálculo de la población era de 63.609 habitantes, en comparación con 59.916 en 1960.

Evolución política y constitucional

93. En las elecciones celebradas el 8 de enero de 1966, el Labour Party volvió al poder, perdiendo solamente un escaño, que correspondió al Dominica United People's Party, de los once disponibles. El Sr. Edward O. Leblanc fue nombrado nuevamente Ministro Principal. El Labour Party tiene ahora derecho a proponer dos miembros del Consejo Legislativo, lo que le concede 12 escaños a su favor y uno en contra en dicho Consejo.

Condiciones económicas

94. En 1964 se produjo una recuperación gradual en el sector agrícola, que había sido devastado por huracanes hacia el final de 1963. Se observó cierto aumento en la superficie cultivada debido tanto a cultivos más extensos en los campos de propiedad privada como a la adquisición de nuevas tierras mediante compra a la Corona.

95. Las bananas continúan siendo el puntal de la economía y el principal cultivo de exportación, seguidas por las frutas cítricas y sus subproductos y por la nuez de coco-copra.

96. En 1963 se calculaban las importaciones en 11.991.464 dólares I O y las exportaciones en 7.752.709 dólares I O, en comparación con 10.600.000 dólares I O y 7.200.000 dólares I O, respectivamente, en 1961.

⁸ La información sobre Dominica ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 2 de julio de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

97. Los ingresos públicos, derivados principalmente de los derechos aduaneros y los impuestos sobre el consumo, ascendieron a 4.733.477 dólares I O en 1964, lo que representa un aumento de 610.898 dólares I O en comparación con la cifra de 1963. Además, se recibieron 824.853 dólares I O de los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial, 34.722 dólares I O en virtud del plan de ayuda a los servicios de ultramar y 1.305.454 dólares I O a título de subsidio de administración, con lo que el total de ingresos ascendió a 6.898.507 dólares I O.

98. Los gastos totales para 1964 ascendieron a 6.502.243 dólares I O, lo que incluye 311.414 dólares I O para planes de desarrollo, en comparación con 6.026.466 dólares I O gastados en 1963.

Condiciones sociales

Mano de obra

99. El 23 de diciembre de 1964 se registró el Seamen and Waterfront Worker's Trade Union, recientemente formado con 369 miembros. Emigraron al Reino Unido 652 trabajadores y 518 volvieron. En 1963, 180 trabajadores emigraron al Reino Unido.

Sanidad

100. En 1964 se observó una gran reducción en la muerte de niños menores de dos años de edad provocada por gastroenteritis y nutrición deficiente, que en años anteriores fueron las causas principales de la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil en 1964 fue de 52,9 por 1.000 nacidos vivos, lo que constituye la cifra más baja registrada en el Territorio. Esta mejora se debe a los programas educativos desarrollados por los centros de educación dietética y los centros de higiene infantil, así como por los servicios de las casas cuna.

101. En 1964 se inició un programa de inmunización contra la poliomielitis. Todos los niños entre los cuatro meses y los cuatro años fueron vacunados en los centros de higiene infantil.

102. Los gastos ordinarios de sanidad ascendieron a 740.178 dólares I O en 1964, en comparación con 609.573 dólares I O en 1963. Además, se gastaron 43.040 dólares I O de los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial.

Situación de la enseñanza

103. Se inauguraron en 1964 dos edificios escolares nuevos, uno en Concord para 33 alumnos y el otro en Wotton Waven para 45 alumnos, para ayudar a los alumnos de esas regiones que debían caminar largas distancias para ir a la escuela. El Gobierno canadiense, por intermedio de su programa de ayuda técnica, ha donado una escuela que, cuando esté terminada, podrá recibir a 1.000 alumnos. La construcción de esta escuela se inició a fines de 1964.

GRANADA⁹

Evolución política y constitucional

104. En el Discurso del Trono pronunciado en octubre de 1965, el Administrador de la isla dijo que el

⁹ La información sobre Granada ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 7 de julio de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

Gobierno de Granada buscaba una constitución más adelantada que la ayudase a adquirir la condición de Estado en unión con Trinidad y Tabago. Manifestó que el 27 de julio de 1965 su Gobierno había pedido al Secretario para las Colonias que considerara conceder la plenitud del gobierno propio a Granada o, por lo menos, que le permitiese volver a la Constitución de 1960¹⁰. Se recordará que de acuerdo con la *Grenada (Constitution) Order in Council, 1962*¹¹, que entró en vigor en junio de 1962, se impusieron ciertas limitaciones al Consejo Legislativo y al Consejo Ejecutivo del Territorio.

105. En noviembre de 1965 se iniciaron conversaciones encaminadas a restablecer totalmente la Constitución de 1960. Este objetivo fue logrado el 1º de febrero de 1966, cuando un nuevo Real Decreto¹² revocó el Real Decreto de 1962 y restableció la Constitución de 1960 en su forma original.

106. El 30 de diciembre de 1965 el Ministerio de Colonias publicó un Libro Blanco que contenía las propuestas constitucionales para los Territorios del Caribe oriental (véanse párrs. 44 a 54 *supra*) y se hicieron los preparativos necesarios para las discusiones que se iban a celebrar con representantes de la Legislatura de Granada en Londres, en marzo-abril de 1966. En las propuestas se propone que el Territorio se convierta en un Estado con la plenitud del gobierno propio, en asociación con el Reino Unido.

107. El 17 de enero de 1966 se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Legislativo de Granada en relación con el bosquejo de constitución para Granada propuesto por el Secretario de Estado, que se publicó al mismo tiempo que el Libro Blanco. El único tema en el programa era una moción presentada por el Ministro Principal de Granada, en la que se pedía al Consejo que aprobase el bosquejo de constitución como base para entablar negociaciones y establecer un comité selecto para que examinara el bosquejo de constitución y formulara recomendaciones con anterioridad a la presentación de propuestas al Secretario de Estado. Parte de esa moción decía: "...esta nueva condición jurídica permitirá que Granada trabaje hacia el objetivo de una comunidad económica del Caribe, de la cual es una parte la unión con Trinidad y Tabago". La moción del Ministro Principal fue aprobada.

108. El Opposition United Labour Party no participó en el debate sobre la moción del Ministro Principal. La razón de esta ausencia, como manifestó el jefe de la oposición, Sr. Eric Gairy¹³, en un comunicado de prensa, fue que:

"...la nueva Constitución propuesta no tiene nada que ver con el Estado unitario y no queríamos por nada intervenir en una moción relativa a la Constitución propuesta, si tiene complicaciones unitarias.

"Hubiéramos estado ansiosos de participar si se hubiese tratado de una simple moción sobre el debate de las propuestas constitucionales y el nombramiento de un comité selecto para estudiar las propuestas y sugerir enmiendas..."

¹⁰ Statutory Instrument No. 2200 de 1959, la *Grenada (Constitution) Order in Council, 1959*, que entró en vigor el 1º de enero de 1960.

¹¹ Statutory Instrument No. 1244 de 1962.

¹² Statutory Instrument No. 2162 de 1965.

¹³ El Sr. Gairy solicitó una audiencia al Comité Especial (véase A/AC.109/PET.466) y fue oído en la 463a. sesión, celebrada el 7 de septiembre de 1966 (véanse párrs. 328 a 355 del presente capítulo).

109. Haciendo uso de la palabra en el Consejo Legislativo el 24 de febrero de 1966, el Ministro Principal, Sr. Herbert Blaize, dijo que todavía estaba en pos de su objetivo de lograr para Granada la condición de Estado unitario con Trinidad y Tabago. La idea de una Granada aislada era absurda, y la federación era cosa ya olvidada. En su búsqueda de gobierno propio, Granada se estaba acercando cada vez más a su posición eventual en una comunidad económica del Caribe. El jefe de la oposición, Sr. Eric Gairy, dijo que la cuestión de la condición de Estado unitario estaba muerta y que era tiempo ya de que el Gobierno abandonase esa idea.

Condiciones económicas

110. En 1964 no se produjeron cambios importantes en las condiciones económicas del Territorio. Al final del año se anunció que todos los puestos de venta al por menor de la organización de comercialización cerrarían a partir del 31 de enero de 1965. El funcionario de comercialización y dos inspectores de producción de su división continuarán inspeccionando todos los productos para exportación y colaborarán en la reunión y registro de las estadísticas de la producción. Con el establecimiento de la asociación de la industria del cacao en Granada, la División de Comercialización coopera en el registro inicial de los productores de cacao y de los comerciantes en dicho producto. Estos funcionarios también dedicarán esfuerzos considerables a poner en contacto a los productores locales, los intermediarios y los consumidores.

111. En 1964 los productos alimenticios, los artículos manufacturados, la ropa y el calzado de cuero siguieron constituyendo la mayor parte de las importaciones, cuyo valor se calcula en unos 17.677.625 dólares I O en 1964, en comparación con 15.023.636 dólares I O en 1963. El valor de las exportaciones se calculó en 7.233.805 dólares I O en 1964, en comparación con 7.854.832 dólares I O en 1963. Las exportaciones principales fueron: semillas de cacao (2.162.219 dólares I O), nuez moscada (1.952.009 dólares I O) y bananas (1.845.325 dólares I O). El comercio se realizó principalmente con el Reino Unido, el Canadá y los Estados Unidos de América.

112. Los ingresos totales, incluyendo un subsidio de 419.000 dólares I O de los fondos de Desarrollo y Bienestar Colonial y un subsidio del Reino Unido de 1.365.000 dólares I O ascendieron aproximadamente a 8.377.000 dólares I O en 1964, en comparación con 8.389.000 I O en 1963. Aparte de los subsidios, las principales fuentes de ingresos en 1964 fueron los derechos de aduana y los impuestos al consumo, que ascendieron a 3.534.000 dólares I O, y los impuestos que produjeron 1.410.000 dólares I O. El cálculo de los gastos totales en 1964 ascendió a la suma de 8.362.000 dólares I O, en comparación con 8.389.000 dólares I O en 1963. Los principales renglones de gastos fueron la educación (1.273.000 dólares I O), los servicios médicos (1.243.000 dólares I O), las obras públicas (1.055.000 dólares I O) y la autoridad central de carreteras (603.000 dólares I O).

113. En noviembre de 1965 el Ministerio de Colonias aprobó propuestas para un gasto de 2 millones de dólares I O para el desarrollo. Esta suma, como lo declaró el Ministro Principal de Granada, debía utilizarse *inter alia* para continuar los planes de su Gobier-

no de aprovisionamiento de agua y carreteras, y como subsidio para abonos en 1966.

Condiciones sociales

Mano de obra

114. La agricultura es la principal fuente de empleo en Granada. El 1º de octubre de 1963 se aumentaron los jornales de los trabajadores agrícolas a 2 dólares I O y 1,70 dólares I O para los trabajadores y trabajadoras, respectivamente, con efecto a partir del 1º de febrero de 1963. Los aumentos fueron el resultado de negociaciones colectivas voluntarias entre los empleadores y los sindicatos de trabajadores, luego de que una Comisión de Encuesta estableciera la base para tales aumentos.

115. En diciembre de 1965 se anunció que los funcionarios de la administración recibirían pagos retroactivos por un total de 783.000 dólares I O. Estos pagos serían efectivos a partir de enero de 1965, de conformidad con las recomendaciones del estudio Gardner-Browne sobre los salarios de la administración pública.

116. En 1964 había 17 sindicatos en el Territorio.

Situación de la enseñanza

117. Se inició la construcción de seis nuevos edificios para escuelas elementales en 1964, uno de los cuales ha sido terminado y ocupado. En cinco de los edificios se alojarán escuelas existentes y uno de los edificios se ha utilizado como nueva escuela de minas. Todavía hay 20 escuelas primarias albergadas en instalaciones anticuadas que consisten en una sola habitación y pasará algún tiempo aún antes de que puedan resolverse los problemas físicos que acosan a la educación. El 31 de diciembre de 1964 había 56 escuelas primarias (del gobierno y subvencionadas) con 26.684 alumnos, y 6 escuelas secundarias con 2.050 alumnos. También hay un colegio local de formación de maestros, al cual concurrieron 33 estudiantes en 1964.

MONTSERRAT¹⁴

Generalidades

118. En 1963 la población era de 13.569 habitantes, en comparación con 12.167 en 1960.

Evolución política y constitucional

119. No se dispone de otra información que la contenida en el párrafo 47 *supra* y en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoeno y vigésimo períodos de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXV, párrs. 132 a 138; y A/6000/Rev.1, cap. XXIV, párrs. 30 a 52).

Condiciones económicas

120. Las condiciones económicas continuaron mejorando en 1964. El desarrollo de las operaciones en bienes raíces y un criterio más positivo en la promoción del turismo constituyen los dos factores principales de este mejoramiento. A fines de 1964 empezó a funcionar una pequeña fábrica de muebles.

¹⁴ La información sobre Montserrat ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 26 de octubre de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

121. El algodón continuó siendo la principal fuente de ingresos para el agricultor campesino, pero en 1964-1965 sólo se plantaron 912 acres (unas 370 has.) en lugar de 1.152 acres en 1963 (unas 465 has.). La cosecha de 1963-1964 rindió 375 fardos de algodón limpio en comparación con 333 fardos en 1962-1963. Debido a las pérdidas causadas en las plantaciones por el huracán "Cleo", la producción total de bananas no fue tan buena como se esperaba y sólo sumó 16.480 racimos valuados en 19.666 dólares I O. Las exportaciones de fruta y hortalizas fuera de las Islas Leeward, de cualquier tipo salvo bananas y jarabe, fueron evaluadas en 36.941 dólares I O. El jugo de lima y los tomates representaron el 80% de esta cifra, mientras que las exportaciones dentro del grupo de las Islas Leeward se calcularon en unas 500 toneladas con un valor de 150.000 dólares I O. La industria de la caña de azúcar sufrió algunos reveses en 1964. No se han terminado las obras en un nuevo ingenio en construcción y se produjo un desgraciado desperfecto en la maquinaria del existente ingenio Parson. Como resultado, sólo se exportaron a Dominica 8.496 galones de jarabe, por un valor de 5.947 dólares I O. El valor de las exportaciones principales en 1964, fue de 232.957 dólares I O. En 1963 el total de las exportaciones fue evaluado en 340.397 dólares I O. El Territorio importa diferentes productos alimenticios como harina, pescado seco y arroz. Otras importaciones principales incluyen artículos manufacturados tales como automóviles, equipo eléctrico, botas y zapatos, así como cortes de géneros de algodón y rayón, cemento y medicamentos y productos farmacéuticos. El valor de las importaciones principales en 1964 fue de 1.149.966 dólares I O. En 1963, el valor del total de importaciones fue de 2.743.934 dólares I O.

122. En 1964, el total de los ingresos territoriales fue de 1.240.603 dólares I O, derivados principalmente de los derechos de aduana (482.495 dólares I O) y de los impuestos al consumo de impuestos internos (393.367 dólares I O). Además, el Territorio recibió subsidios de ayuda del Reino Unido por un total de 1.477.280 dólares I O, lo que llevó el total de los ingresos a 2.717.883 dólares I O. El total de gastos fue de 2.740.523 dólares I O. En 1963, los ingresos territoriales ascendieron a 999.792 dólares I O y los subsidios a 1.086.027 dólares I O. El total de gastos fue de 1.992.786 dólares I O.

Condiciones sociales

Mano de obra

123. Debido al desarrollo de las operaciones en bienes raíces producido en 1964, las oportunidades de empleo aumentaron considerablemente. Se contrataron 40 trabajadores agrícolas para desempeñar tareas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

124. Los tres sindicatos registrados en virtud del *Trade Union Act* tenían 620 miembros. Los jornales prevalecientes para hombres iban de 2,60 dólares I O diarios para la mano de obra agrícola no capacitada, a 5,50 dólares I O diarios para los capataces empleados en dependencias del Gobierno. En la industria, los trabajadores no capacitados recibían de 2,50 dólares I O a 3,25 dólares I O por día y los trabajadores capacitados recibían de 5 a 8 dólares I O diarios.

Sanidad

125. En 1964 había dos médicos registrados, tres enfermeras superiores, 24 enfermeras diplomadas, siete enfermeras parcialmente capacitadas, tres parteras su-

periores, 22 parteras diplomadas, tres inspectores sanitarios, un técnico de laboratorio y de rayos X y dos farmacéuticos.

126. La población media a mitad de año se calculaba en 13.885 habitantes. La tasa de natalidad era de 24,6 por mil y la de mortalidad 7,7 por mil. Continuó la considerable reducción en la mortalidad infantil resultante de los programas sanitarios OMS/UNICEF.

127. En 1964 los gastos ocasionados por los servicios médicos y sanitarios ascendieron a 247.200 dólares I O, en comparación con 240.793 dólares I O en 1963.

Situación de la enseñanza

128. Había 3.203 niños matriculados en las escuelas en 1964, lo que incluye 2.938 en las escuelas primarias y 265 en la escuela secundaria. En 1963, 3.066 alumnos concurren a la escuela primaria y 217 a la escuela secundaria.

129. Los gastos ordinarios de la educación primaria en 1964 fueron de 239.949 dólares I O, mientras que en la enseñanza secundaria fueron de 56.292 dólares I O. No hubo gastos de capital. Los derechos escolares cobrados en estas escuelas secundarias sumaron 5.541 dólares I O. Los gastos de la enseñanza representan el 13,22% de todos los gastos recurrentes del Territorio. En 1963, los gastos recurrentes de la enseñanza primaria fueron de 209.427 dólares I O y los gastos de la enseñanza secundaria fueron de 62.685 dólares I O, lo que representa el 14,23% de todos los gastos recurrentes del Territorio.

SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA¹⁵

Evolución política y constitucional

130. No se dispone de otra información que la contenida en los párrafos 44 a 79 *supra* y en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimoveno y vigésimo periodos de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXV, párrs. 149 a 155; y A/6000/Rev.1, cap. XXIV, párrs. 30 a 52).

Condiciones económicas

131. El valor total de las importaciones de las islas en 1964 fue de 13.600.000 dólares I O, en comparación con 12.200.000 dólares I O en 1963. Las principales importaciones en 1964 fueron productos alimenticios tales como harina (810.983 dólares I O), carne (635.258 dólares I O), pescado (427.242 dólares I O), gasolina y kerosene (329.699 dólares I O), maderas (477.289 dólares I O), abonos (386.005 dólares I O), ropa (219.648 dólares I O) y automóviles (241.338 dólares I O). Los artículos importados vinieron principalmente del Reino Unido (3.600.000 dólares I O), Canadá (2.500.000 dólares I O) y los Estados Unidos (1.900.000 dólares I O).

132. El valor total de las exportaciones del Territorio ascendió en 1964 a 9.900.000 dólares I O, en comparación con 8.300.000 dólares I O en 1963. Las exportaciones principales siguieron siendo azúcar

(8.800.000 dólares I O), melaza (346.000 dólares I O), fibra de algodón (116.000 dólares I O) y sal (89.926 dólares I O). De las exportaciones, 7.340.000 dólares I O fueron al Reino Unido y 1.060.000 dólares I O a Canadá.

133. En 1964 el ingreso local, que seguía proviniedo principalmente de los derechos de importación (1.700.000 dólares I O) y del impuesto a los réditos (1.300.000 dólares I O), ascendió a 5.100.000 dólares I O en comparación con 4.800.000 dólares I O en 1963.

Condiciones sociales

134. Se registró un aumento general de dos centavos por hora para todos los trabajadores de dependencias oficiales que no figuran en la plantilla. El St. Kitts-Nevis Trade and Labour Union negoció con éxito un aumento especial en forma de primas pagaderas a los trabajadores de los ingenios.

Situación de la enseñanza

135. En 1966 el número de niños que recibía enseñanza primaria en San Cristóbal, incluso los que concurrían a escuelas superiores, fue de 10.072. En los próximos cinco años el Gobierno espera proporcionar instalaciones adicionales para recibir a unos 5.000 niños en San Cristóbal-Nieves-Anguila. Se están tomando medidas para mejorar la formación de los maestros, se agrandará el programa de formación en el empleo y, además, se espera poder disponer que otros diez maestros por año concurren a un colegio de formación de maestros en el exterior. Se aumentará la asignación destinada a libros de texto y otro material didáctico.

136. El número de niños que recibía enseñanza primaria en Nieves fue de 3.954, y en Anguila, de 1.744. Nieves tiene un Departamento de Educación en común con San Cristóbal y Anguila y las propuestas para el mejoramiento de la educación en San Cristóbal se aplican también a Nieves.

SANTA LUCIA¹⁶

Generalidades

137. La población, a fines de 1963, se calculaba en 99.084 habitantes.

Evolución política y constitucional

138. En agosto de 1965, el Consejo Legislativo de Santa Lucía prestó aprobación a su Gobierno, por 9 votos a favor y 2 en contra, para que tratara de lograr la plenitud del gobierno propio en el Territorio antes del 1º de enero de 1966. El St. Lucia Labour Party se opuso a estas medidas y solicitó al Gobierno del Reino Unido que investigase la administración del Territorio a cargo del United Workers' Party. El United Workers' Party conquistó ocho de los diez escaños electivos del Consejo Legislativo después de las elecciones celebradas en junio de 1964. Anteriormente, el Labour Party estuvo en el poder durante 13 años.

¹⁵ La información sobre San Cristóbal-Nieves-Anguila ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 29 de septiembre de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

¹⁶ La información sobre Santa Lucía ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 2 de septiembre de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

Condiciones económicas

139. En 1964, Santa Lucía se benefició con la asistencia financiera prestada para el desarrollo económico por el Reino Unido, los Estados Unidos y el Canadá. Las proyecciones para el desarrollo del Gobierno de Santa Lucía se fundan sobre la esperanza de que esta asistencia no solamente continuará sino que aumentará en los próximos años. La producción de bananas, principal cultivo del Territorio, continuó demostrando constantes progresos. En 1964 se exportaron al Reino Unido 5.142.000 racimos por un valor de 8.189.516 dólares I O en comparación con 4.400.000 racimos por un valor de 6.191.000 dólares I O en 1963. Los otros cultivos principales para exportación son la copra, el cacao y el aceite de coco. La producción de copra fue de 5.275.300 libras por un valor de 789.225 dólares I O; la de cacao fue de 233.774 libras con un valor de 103.952 dólares I O y la de aceite de coco (refinado y sin refinar) fue de 200.378 galones con un valor de 474.255 dólares I O. Se ha registrado un aumento general en la producción debido principalmente a la aplicación de abonos.

140. El total de las exportaciones locales y reexportaciones del Territorio en 1964 fue calculado en 9.827.276 dólares I O. El total de las importaciones se calculó en 20.408.831 dólares I O. No se dispone de estadísticas detalladas de las importaciones correspondientes a 1964.

141. Los principales renglones de ingresos en 1963 continuaron siendo los derechos de aduana y los impuestos al consumo (3.666.969 dólares I O) y el impuesto a los réditos (1.278.474 dólares I O en 1964). El cálculo de los ingresos para 1964 fue de 7.561.706 dólares I O. Además, el Territorio recibió un subsidio de 64.104 dólares I O de la ayuda a los servicios de ultramar y un subsidio de 625.920 dólares I O del Desarrollo y Bienestar Colonial, lo que lleva el cálculo de los ingresos a 8.251.730 dólares I O. Por primera vez en 16 años el Territorio no figuró en las subvenciones de la Administración.

142. En un intento por aumentar el turismo, la Commonwealth Development Corporation, por intermedio de los hoteles Caribeach, ha construido el primer hotel de lujo en la isla y se está estableciendo en Cap Estate un importante barrio residencial en una superficie de 2.000 acres (unas 800 has.) en la parte norte de la isla. Los gastos de construcción de este último ascenderán a 2.500.000 libras esterlinas.

*Condiciones sociales**Mano de obra*

143. Los principales problemas en la esfera de las condiciones de la mano de obra y del empleo siguen siendo la falta de una información adecuada y al día con respecto a todos los aspectos del mercado de trabajo (empleo, desempleo, composición, distribución, movilidad, etc.) y una falta de estadísticas de la mano de obra, particularmente las relacionadas con el promedio de ganancias y el horario real de trabajo en los principales empleos. Se solicitó a la Dirección de Asistencia Técnica que suministrara asistencia técnica en virtud del Programa de 1964-1966 en la esfera de la reunión y compilación de estadísticas de la mano de obra. En el año hubo siete interrupciones del trabajo, ninguna de las cuales excedió de dos días y en ellas menos de 100 trabajadores estuvieron directamente interesados.

Sanidad

144. No se informó de cambios sobre el número de hospitales y el personal médico y sanitario. La tasa de natalidad en 1963 fue de 40,2 por 1.000 y la tasa de mortalidad fue de 10,8 por 1.000, en comparación con 12,4 por 1.000 en 1964. Las principales causas de fallecimiento fueron las enfermedades de la primera infancia (11,6 por 100.000), gastroenteritis y colitis, excepto la diarrea del recién nacido (99,92 por 100.000), neumonía (99,92 por 100.000), y otras. En 1964 el cálculo de los gastos recurrentes autorizados en sanidad (incluyendo subvenciones del Desarrollo y Bienestar Colonial) fue de 991.126 dólares I O.

Situación de la enseñanza

145. A fines de 1964 había 58 escuelas primarias con 23.120 alumnos y 651 maestros (de los cuales 117 habían recibido capacitación) y tres escuelas secundarias con 939 alumnos y 53 maestros (de los cuales 22 eran graduados), un aumento de siete en comparación con 1963. En 1963-1964 se terminaron tres escuelas destinadas a reemplazar instalaciones con capacidad de recibir a 1.080 alumnos y se iniciaba la construcción de una cuarta escuela para 550 alumnos. La construcción y el reemplazo de escuelas produjeron un brusco aumento en la concurrencia escolar, hecho que agravó la ya seria escasez de maestros capacitados. Los gastos recurrentes de la educación en 1964 ascendieron a 1.269.489 dólares I O, en comparación con 1.056.152 dólares I O en 1963. Además, los gastos de capital sumaron 15.940 dólares I O, en comparación con 55.313 dólares I O en 1963; los subsidios del Desarrollo y Bienestar Colonial totalizaron 176.232 dólares I O.

*SAN VICENTE¹⁷**Generalidades*

146. La población total de San Vicente al 31 de diciembre de 1964 fue calculada en 87.000 habitantes.

Evolución política y constitucional

147. No se dispone de otra información que la contenida en los párrafos 44 a 79 *supra* y en los informes del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno y vigésimo períodos de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXV, párrs. 186 a 193; y A/6000/Rev.1, cap. XXIV, párrs. 30 a 52).

Condiciones económicas

148. Como en el año anterior, las bananas y el arruuz continuaron siendo los cultivos principales producidos para la exportación. La producción de bananas permaneció más o menos en el mismo nivel: se exportaron 28.057 toneladas cortas (3.372.700 dólares I O), en comparación con 28.217 toneladas cortas (3.006.935 dólares I O). La superficie cultivada siguió siendo de unos 8.500 acres (unas 3.450 has.). Las tormentas de

¹⁷ La información sobre San Vicente ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 30 de agosto de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

viento volvieron a causar considerables daños. La producción de arrurruz llegó a un máximo absoluto en 1964: 58.000 barriles comparados con 50.317 barriles de la cosecha anterior. Debido a las poco favorables perspectivas del mercado se esperaba que la cosecha de 1964-1965 disminuiría a unos 35.000 barriles. Se consideraba necesario hacer nuevas reducciones en la superficie cultivada, para llevarla a unos 2.000 acres (800 has., aproximadamente) con el propósito de evitar la transferencia de existencias desastrosamente grandes de un año a otro.

149. La superficie plantada con algodón aumentó a 966 acres (unas 400 has.) (635 acres en 1963). El precio mundial del cacao ha afectado seriamente los intentos para promover este cultivo. Afortunadamente, el precio local todavía era atractivo y esto permitió a los pequeños plantadores cultivar 80 acres más en 1964. Los precios de la nuez moscada todavía eran equitativos y los productores estaban mudando su interés a la promoción de este cultivo arbóreo. Se hacían modestas plantaciones de café Robusta. La producción de copra permaneció constante con unas 3.000 toneladas. Las exportaciones siguieron en un nivel de unas 2.404 toneladas largas, en comparación con 2.409 toneladas largas en 1963. Las exportaciones de nuez de coco seca ascendieron de 433.615 nueces a 678.715 nueces en 1964.

150. Se ha propuesto un nuevo plan de pesquerías que todavía no ha sido aprobado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) iba a iniciar actividades de investigación y de formación en este puerto del Caribe, donde estaría fondeado uno de sus cinco barcos de pesca de altura modernos. Los departamentos de pesquería locales esperaban obtener de aquéllas mucha ayuda necesaria en materia de formación del personal local y de la preparación de planos de los lugares de pesca.

151. Los principales artículos de exportación continuaron siendo las bananas y el arrurruz. En 1964 el total de exportaciones fue de 5.989.084 dólares I O. Las importaciones incluyen productos alimenticios, calzado, géneros, maderas, etc. El valor total de las exportaciones ascendió a 16.064.114 dólares I O en 1964. El comercio se realiza principalmente con el Reino Unido, otros territorios del Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos.

152. El total de los ingresos ascendió a 6.950.293 dólares I O en 1964, en comparación con 5.416.774 dólares I O en 1963. Los ingresos ordinarios, de los cuales más de la mitad derivaban de los derechos de aduana, los impuestos al consumo y otros impuestos, ascendieron a 4.739.913 dólares I O en 1964, en comparación con 4.194.416 dólares I O en 1963. Además, el Territorio recibió subsidios del Reino Unido (1.134.907 dólares I O), de los fondos del Desarrollo y Bienestar Colonial (60.227 dólares I O) y de la ayuda a los servicios de ultramar (13.680 dólares I O) por un total de 1.208.814 dólares I O, en comparación con 1.302.358 dólares I O en 1963. Los gastos en el presupuesto de 1964 sumaron 5.594.141 dólares I O, en comparación con 5.530.399 dólares I O en 1963. Los gastos del Desarrollo y Bienestar Colonial fueron de 503.737 dólares I O.

Condiciones sociales

Mano de obra

153. Al 31 de diciembre de 1964 se calculaba la población económicamente activa en 31.000 personas. Por

población económicamente activa se entiende el número de personas entre 15 y 65 años de edad que trabajan por pago o ganancia, o que se ofrecen para desempeñar ese tipo de trabajo. La población económicamente activa se renueva constantemente con los jóvenes que ingresan a razón de unos 1.000 por año. El problema de encontrar empleo para la fuerza de trabajo ocupa al presente la atención del Gobierno. El Departamento de Obras Públicas desarrolla sus actividades, en lo posible, durante el período de escasez de trabajo, de junio a noviembre, momento en que se trabaja muy poco en la agricultura, porque San Vicente es una comunidad agrícola y el empleo es estacional. El Departamento de Trabajo es el responsable de la administración de la mano de obra.

154. No se han producido cambios en el número de las organizaciones registradas. En 1964 volvieron de los Estados Unidos y de St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 185 trabajadores contratados. En el año se contrataron 235 trabajadores.

Sanidad

155. La organización del Departamento de Sanidad permanece sin cambios. Los puestos vacantes de un funcionario médico superior y tres funcionarios médicos de distrito fueron llenados en 1964. La expansión de los servicios médicos incluyó un dispensario para pacientes externos. En 1964 había once médicos registrados en los servicios oficiales y dos médicos registrados privados, ocho enfermeras con capacitación superior en los servicios oficiales, 54 enfermeras diplomadas en los servicios oficiales y 23 enfermeras privadas, y 4 parteras de formación superior en los servicios oficiales. En 1964 la tasa de natalidad fue de 42,7 por 1.000, en comparación con 43,1 por 1.000 en 1963; y la tasa de mortalidad fue de 9,5 por 1.000, en comparación con 11,9 por 1.000. Los niveles de morbilidad y mortalidad continuaron demostrando las mismas tendencias observadas en el año anterior, salvo un aumento en el número de casos de fiebre tifoidea denunciados (de 15 a 29) como resultado de un pequeño brote. La alta tasa de mortalidad en los niños pequeños sigue siendo un problema de salud pública; el riesgo de muerte es mayor entre las edades de 6 meses y 2 años y las causas dominantes son la nutrición deficiente y la gastroenteritis.

Situación de la enseñanza

156. No se han producido cambios significativos en la situación de la enseñanza en el Territorio. En 1964 terminó la construcción del Centro de Capacitación en Sanidad y Bienestar (Youth Trust Fund) y de la escuela primaria para varones (para recibir a 500 alumnos). Las escuelas primarias siguen muy abarrotadas y la construcción de escuelas no ha llegado todavía a satisfacer la necesidad de instalaciones adicionales.

4. BARBADA¹⁸

Generalidades

157. A finales de 1964, el Territorio tenía 241.925 habitantes, lo que da una densidad de 1.481 personas por milla cuadrada.

¹⁸ La información sobre Barbada ha sido extraída de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, conforme al inciso c del Artículo 73 de la Carta, el 25 de agosto de 1965, relativa al año terminado el 31 de diciembre de 1964.

Acontecimientos políticos y constitucionales

158. El 12 de agosto de 1965, el Gobierno de Barbada presentó al poder legislativo un libro blanco titulado "The Federal Negotiations, 1962-1965 and Constitutional Proposals for Barbados", en el que se decía que se pediría a la Cámara de Representantes que diese su asentimiento a una resolución en que habría de solicitarse del Secretario de Estado para las Colonias que fijase una fecha lo más temprana posible para una conferencia sobre la cuestión de la independencia; de accederse a ello, se invitaría al Senado a que aprobase tal decisión.

159. El 14 de agosto, el Primer Ministro de Barbada, Sr. Errol Barrow, declaró en una conferencia de prensa que su Gobierno, durante tres años, había venido examinando, con las autoridades de las demás Islas de los grupos Windward (Barlovento) y Leeward (Sotavento), lo concerniente a una federación del Caribe oriental, y que no se había llegado todavía a adoptar un criterio básico sobre la formación de dicha federación. Sin embargo, añadió que el Libro Blanco y las decisiones que en él figuraban no habían cerrado las puertas a la federación.

160. El Democratic Labour Party (DLP), partido gobernante de Barbada, decidió, en la reunión anual que celebró el 21 de septiembre de 1965, hacer suya la propuesta en favor de la independencia absoluta contenida en el Libro Blanco, y deseó una resolución encaminada a proclamar la independencia dentro de una federación.

161. Desde que se publicó el Libro Blanco, el Barbados National Party (BNP), el Barbados Labour Party (BLP) y un nuevo grupo llamado "Under Forties", que constituyen la oposición al Gobierno, han venido ventilando públicamente sus opiniones en contra de la proclamación de la independencia para Barbada únicamente. El Barbados Labour Party formuló la acusación de que el Libro Blanco contenía gran número de tergiversaciones y que su material había sido presentado en forma de inducir a error a la población en lo relativo al costo de la independencia. El vocero del BLP dijo: "El partido ha resuelto patrocinar una serie de reuniones encaminadas a movilizar la opinión pública, y se valdrá de todos los medios a su alcance para poner en descubierto los equívocos y tergiversaciones contenidos en el Libro Blanco y para ganar adeptos a la opinión de que el porvenir de Barbada está en una federación independiente del Caribe oriental."

162. El 24 de noviembre de 1965, el Secretario del Barbados Labour Party presentó al Gobernador, para su remisión al Secretario de Estado para las Colonias, una resolución en que se pedía la convocación a elecciones generales para decidir si Barbada debería declararse independiente, sin más, o si debería formar parte de una federación del Caribe oriental. En la resolución se señalaba también que el pueblo no había conferido al Gobierno ningún mandato para que gestionase la independencia de Barbada al margen de la federación.

163. En cambio, la Barbados Workers' Union se ha comprometido a prestar todo su apoyo al plan del Gobierno de Barbada encaminado a proclamar la independencia. Ese compromiso figura en una resolución aprobada en la 24a. conferencia anual de dicha entidad celebrada el 28 de agosto de 1965.

164. El 8 de enero de 1966, la Cámara de Representantes de Barbada, tras un debate de cinco días, aprobó

por 14 votos contra 9 una resolución en que se pedía que se proclamase la independencia de Barbada al margen de la federación. Algunos miembros del Barbados Labour Party, que actúa en la oposición, se pronunciaron a favor de la federación.

165. El 24 de enero, el Senado, que está compuesto por veintiún miembros, aprobó por 17 votos contra 3 una resolución en que se autorizaba al Gobierno a que proclamase la independencia de Barbada al margen de la federación. El Senado rechazó una enmienda en que se pedía la convocación a elecciones generales para que la población decidiese si quería que se proclamase la independencia al margen de la federación del Caribe oriental o que se incorporase a ésta.

166. El mismo día, el Primer Ministro de Barbada dijo que esperaba que el Territorio se adaptase a la independencia absoluta sin que su vida parlamentaria experimentase ningún trastorno, y declaró que Barbada seguiría perteneciendo al Commonwealth.

167. El 3 de febrero de 1966, se anunció en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido había accedido a la petición de Barbada de que se preparase una conferencia sobre la cuestión de la independencia, en una fecha que conviniese a todos los interesados. En respuesta a la pregunta de si, como paso previo a la conferencia, se prometería celebrar elecciones en la isla antes de concederse definitivamente la independencia, el Subsecretario de Estado para las Colonias contestó que "desde luego, el Gobierno de Su Majestad desea tener la certeza, antes de acceder a la independencia de cualquier territorio de que la mayoría de la población de ese territorio desea esa independencia".

168. Entre los días 20 de junio y 5 de julio de 1966 se celebró en Londres la Conferencia Constitucional sobre Barbada. Representaban a la Isla el Primer Ministro y miembros de su partido (Democratic Labour Party), el líder de la oposición y miembros de su partido (Barbados National Party) y representantes del Barbados Labour Party.

169. La Conferencia tuvo a la vista el proyecto de constitución sobre la independencia preparado por el Gobierno de Barbada y aprobado por las dos cámaras del Parlamento de Barbada.

170. En la Conferencia se acordó que Barbada pasará a ser independiente el 30 de noviembre de 1966. Hubo, sin embargo, algunas discrepancias entre el partido del Gobierno y los partidos de la oposición sobre determinadas disposiciones del proyecto de constitución. Algunas de las discrepancias se discutieron y fueron resueltas, pero respecto de otras no pudo lograrse consenso.

171. El Secretario de Estado para las Colonias resumió las actuaciones de la Conferencia en la siguiente declaración, hecha ante ella el 1º de julio:

"La presente Conferencia Constitucional ha terminado ya la parte principal de sus trabajos.

"Hemos examinado el proyecto de constitución presentado por el Gobierno de Barbada y celebro poder decir que todos los partidos representados en torno a esta mesa se han puesto de acuerdo sobre una gran parte del mismo. Así se hará constar en el informe de la Conferencia, donde se expondrán las líneas principales de la constitución. Hay también algunos puntos respecto de los cuales, por desgracia, no pudieron coincidir el Gobierno y los dos partidos de la opo-

sición, y me hago cargo de la importancia que algunos de ellos tienen para los partidos de Barbada. Son todos ellos puntos en los que es comprensible que pueda haber discrepancias de opinión entre los distintos grupos de una sociedad democrática que elaboran una constitución para su independencia. También habrán de consignarse tales desacuerdos en el informe de la Conferencia.

"El poder legislativo de Barbada al solicitar de mí que convocara esta Conferencia, propuso que, como resultado de ella, Barbada pasara a obtener su independencia separada en 1966.

"Sobre este punto de la independencia por separado para Barbada, he sostenido, como a todos ustedes consta, conversaciones separadas con todos los partidos representados en torno a esta mesa. Entiendo que, aunque algunos de los representantes de Barbada hubieran preferido que su país lograra la independencia en asociación con sus vecinos del Caribe, todos los partidos coinciden en que, por el momento, esta aspiración no es realizable, y que, por lo tanto, se adhieren a la propuesta de que Barbada pase a ser independiente por separado.

"En mis reuniones con los partidos por separado, para tratar de este punto, dejé sentado que, una vez oídas sus opiniones, yo tenía que consultar con mis colegas, y que luego les haría saber la decisión del Gobierno del Reino Unido. Ahora puedo informar a la Conferencia de que se ha efectuado esta consulta y que, con reserva de la aprobación de la legislación pertinente por el Parlamento del Reino Unido, el Gobierno de Su Majestad conviene en que Barbada pase a ser independiente el 30 de noviembre de 1966.

"La cuestión de decidir la fecha de las próximas elecciones en la Isla corresponde al Gobierno de Barbada, habida cuenta de que su disolución deberá producirse en todo caso el 19 de diciembre de 1966 a más tardar. Desde luego, comunicará oportunamente su decisión al respecto."

172. Las disposiciones principales de la nueva constitución de Barbada se exponen más adelante. También se indican las disposiciones sobre las que no están de acuerdo los partidos de la oposición.

173. El poder ejecutivo será ejercido por un Gobernador General. La dirección y control generales de la Administración de Barbada corresponderá al Gabinete, compuesto de un Primer Ministro y de otros ministros. El Gobernador General designará para Primer Ministro a la persona que le parezca más capaz de obtener el apoyo de la mayoría de los miembros de la Asamblea. Los demás ministros serán nombrados por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro.

174. En la constitución se establecerá un poder legislativo que se compondrá de un Senado integrado por veintiún miembros y una Asamblea Legislativa formada por veinticuatro miembros. El Gobernador General nombrará a todos los miembros del Senado: a doce de ellos previa propuesta del Primer Ministro, a dos mediante propuesta del líder de la oposición y a los otros siete a su propio arbitrio, para representar los intereses religiosos, económicos o sociales. En la constitución figurarán cláusulas por las que se restrinjan los poderes del Senado conforme a las disposiciones vigentes. Los partidos de la oposición propusieron que el Senado estuviera compuesto de forma que el Gobierno no pu-

diera obtener los dos tercios de mayoría requeridos para la reforma de una disposición de la constitución amparada por garantías especiales sin el apoyo de por lo menos parte de la oposición. La propuesta no tuvo aceptación.

175. La Asamblea Legislativa se compondrá de no menos de veinticuatro miembros. En la constitución se establecerán ciertos principios sobre el sistema electoral y se estipularán las condiciones para ser miembro de la Asamblea. Sobre todas las demás cuestiones en materia de elecciones se estatuirá mediante leyes aprobadas por las dos Cámaras. Los partidos de la oposición propusieron que en la constitución se establecieran las condiciones para ser elector así como las que haya de reunirse para ser miembro de las Cámaras y que tanto unas como otras fuesen disposiciones amparadas por garantías especiales. Propusieron también que en la constitución se estableciese una comisión imparcial para fiscalizar el registro de electores y la celebración de las elecciones; se fijasen distritos electorales para cada puesto y se crease una comisión de límites para estudiar las delimitaciones de los distritos. Estas propuestas no fueron aceptadas.

176. En la constitución también figurará una cláusula para la salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, lugar de origen, opinión política, color, credo o sexo, con sujeción al respeto de los derechos y libertades de los demás y al bien público. Con sujeción a las garantías pertinentes, se permitirá la suspensión de algunos de esos derechos y libertades fundamentales en tiempo de guerra, emergencia pública o cuando las instituciones democráticas se vean amenazadas por subversión. Los partidos de la oposición propusieron otro texto con el que se pretendía evitar la utilización de la palabra "subversión". El Presidente consideró que no había diferencias de fondo entre los dos textos y se pronunció contra el texto presentado por la oposición.

177. En la constitución también se establecerá el procedimiento que regirá toda reforma de la propia constitución por el poder legislativo. Algunas de sus disposiciones no podrán ser modificadas sin contar con el apoyo de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras. Entre estas disposiciones amparadas por garantías especiales se cuentan las relativas a: ciudadanía; derechos y libertades fundamentales; nombramiento de miembros del Senado, incluso las condiciones necesarias para serlo; y la composición de la Asamblea Legislativa. El requisito de una mayoría de dos tercios no será necesario en caso de reforma para dar valor constitucional a los acuerdos por los que Barbada se uniera a cualquier otro país o territorio del Commonwealth.

178. Serán *ipso facto* ciudadanos de Barbada los ciudadanos del Reino Unido y de las Colonias nacidos en Barbada o hijos de padre nacido en Barbada. Los ciudadanos del Commonwealth, o sus esposas, que reúnan determinadas condiciones de residencia podrán registrarse como ciudadanos de Barbada. Los partidos de la oposición se mostraron en desacuerdo con que este registro esté sujeto a las excepciones prescritas por la ley en interés de la seguridad nacional y del orden público.

179. La constitución también estatuirá sobre materias tales como la duración de la legislatura de las dos Cámaras, la organización judicial, la administración pública y las comisiones de administración pública.

Condiciones económicas

180. La producción de azúcar y sus derivados, ron y melaza, continuó dominando durante 1964 la economía de la isla. En 1964 había 50.848 acres dedicados a la caña de azúcar. La producción total de azúcar y de melazas finas fue de 161.497 toneladas. La industria pesquera obtuvo 4.600.000 libras de pescado y 1.480.000 libras de langostinos en 1964.

181. La producción industrial de gas, que en 1964 ascendió a 117.600.000 pies cúbicos, se destinó a fines domésticos, industriales y comerciales. Se examinaron solicitudes de varias empresas para la concesión de licencias para prospección de petróleo y el 10 de julio de 1965 se anunció que el Gabinete había concedido una licencia válida por un período de dos años, en virtud del artículo 4 de la Ley del Petróleo de 1950.

182. La industria turística siguió creciendo. En 1964 visitaron la isla 57.598 turistas. Además, hicieron escala en Barbada 95 buques en viajes de recreo, con 41.671 pasajeros. Se calcula que la entrada bruta en divisas procedentes de esta actividad ascendió a 23 millones de dólares I O.

183. En 1964, el valor de las importaciones ascendió a 109.019.973 dólares I O, en comparación con 98.871.434 dólares I O en 1963. El aumento de 10.148.539 dólares I O correspondió principalmente a alimentos, productos químicos, maquinaria y medios de transporte y artículos manufacturados. Los artículos importados provienen principalmente del Reino Unido (32.566.394 dólares I O en 1964), los Estados Unidos (17.590.670 dólares I O), Canadá (12.920.046 dólares I O) y otros países del Commonwealth.

184. El valor total de las exportaciones, excluidas las mercaderías en tránsito, fue de 60.468.621 dólares I O en 1964, en comparación con 69.788.185 dólares I O en 1963. Los artículos principales de exportación continuaron siendo el azúcar (140.744 toneladas, por un valor de 30.893.233 dólares I O); melazas (10.567.427 galones, por un valor de 6.247.607 dólares I O); ron (765.403 galones, por un valor de 2.242.183 dólares I O, cifras provisionales); jabón, margarina, aceites comestibles y tocino.

185. El 15 de diciembre de 1965 se firmó un acuerdo para constituir una zona de comercio libre formada por Barbada, Antigua y la Guayana Británica (véase párr. 86 *supra*). Los artículos más importantes de los 37 de que consta el acuerdo se refieren a la libertad de comercio para los artículos producidos localmente.

186. Las principales fuentes de ingresos continuaron siendo los derechos de aduana y los impuestos sobre el consumo, así como otras formas de tributación. Se calcula que los ingresos totales en 1964-1965 ascendieron a 37.398.803 dólares I O. Los gastos totales de capital en 1964-1965 fueron de 8.201.356 dólares I O, en comparación con 9.553.178 dólares I O en 1963-1964. Se calcula que los gastos totales ascendieron en 1964-1965 a 33.038.009 dólares I O. Al 31 de marzo de 1965 la deuda pública había subido a 43.235.000 dólares I O, en comparación con 35.106.000 dólares I O en 1964.

Condiciones sociales

187. El índice de los precios al por menor en 1964 (junio de 1953 = 100) se elevó de 115,9 en enero a

117,1 en octubre y descendió a 116,7 en diciembre. Según los cálculos provisionales efectuados, el ingreso nacional fue de 147.100.000 dólares I O en 1964.

Mano de obra

188. La mayoría de la población ocupada en una actividad remunerada trabaja en el cultivo y la cosecha de la caña de azúcar y en la elaboración de azúcar y melazas finas. Aproximadamente 22.264 trabajadores estuvieron ocupados durante la época de mayor actividad de la zafra (enero a junio) y 15.943 durante la temporada entre zafras (julio a diciembre). No se dispone de estadísticas recientes relativas al desempleo y al subempleo.

189. La emigración de los trabajadores agrícolas de Barbada con contratos a corto plazo para servir a empleadores privados en otros países, siguió las tendencias de años anteriores. A comienzos de 1963 había 1.960 trabajadores con contratos. En el curso del año fueron repatriados 1.052 trabajadores y se empleó a 1.925. A fines del año el número de trabajadores con contratos aún vigentes empleados en los Estados Unidos de América era de 1.634. En 1964 emigraron para emplearse en el Reino Unido 2.507 personas, de las cuales 972 estaban patrocinadas por el Gobierno. El Ministerio británico de Obras Públicas contrató a 33 trabajadores para que trabajasen en la construcción de la estación ultramarina de la BBC.

Sanidad

190. En 1964 no se señaló ninguna modificación cuantitativa en los servicios médicos. El personal sanitario estaba compuesto por 43 médicos registrados oficiales y 42 médicos registrados privados (las autoridades centrales y locales emplean a jornada parcial a 25 de los médicos privados), 53 enfermeras de categoría superior, 20 parteras certificadas, 20 parteras parcialmente calificadas.

191. La tasa de natalidad en 1964 fue de 26,6 por mil y la tasa de mortalidad de 8,7 por mil. La mortalidad infantil fue de 52 por cada mil nacimientos. Los gastos periódicos y de capital de los servicios médicos en 1963-1964 ascendieron, respectivamente, a 3.479.599 dólares I O y a 3.412.555 dólares I O.

Situación de la enseñanza

192. En el cuadro siguiente figura el número de escuelas, alumnos y maestros del territorio en 1963-64:

	<i>Escuelas</i>	<i>Maestros</i>	<i>Alumnos</i>
Primaria	118	801	41.322
Secundaria general	6	193	6.479
Secundaria superior	10	210	4.716
Enseñanza técnica y de artes y oficios	2	19	572
Enseñanza normal	1	10	141
Reformatorios	2	24	80

193. Se calcula que los gastos destinados a la enseñanza en 1964-1965 ascendieron a 6.946.074 dólares I O y los gastos de capital a 736.324 dólares I O. Las cifras correspondientes a 1963 fueron 6.092.434 dólares I O y 1.052.234 dólares I O, respectivamente.

5. BERMUDAS¹⁹*Información general*

194. En junio de 1964 la población civil residente se calculaba en un total de 47.612 personas, en comparación con 46.783 un año antes. Unas dos terceras partes de los habitantes son de ascendencia africana o mestiza y el resto es de origen europeo.

Situación política y constitucional

195. Como se señalaba en el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo periodo de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. XXIII, párr. 9) en 1963 se estableció una Comisión Mixta integrada por miembros de ambas cámaras para considerar los cambios constitucionales. La constitución actual dispone la existencia de un Consejo Ejecutivo que asesora al Gobierno, un poder legislativo bicameral compuesto de un Consejo Legislativo integrado por miembros nombrados y de una Asamblea constituida por miembros elegidos por todos los naturales de las Bermudas y todos los súbditos británicos de más de 25 años de edad. Se concedió un segundo voto a determinadas personas con propiedad absoluta de bienes.

196. El informe que la Comisión Mixta presentó a la Asamblea el 12 de noviembre de 1965 estaba formado por un informe de la mayoría y cuatro informes separados de la minoría.

197. La Comisión Mixta señaló que había presentado un informe provisional que se ocupaba de las enmiendas propuestas a la *Parliamentary Franchise Act* por las que se abolirían el segundo voto o el voto adicional por poseer determinados bienes y se reduciría la edad mínima de los votantes de 25 a 21 años. Se señaló también que se había presentado un proyecto para aplicar estas propuestas que había sido aprobado por la Asamblea por 24 votos contra 2 pero había sido rechazado en el Consejo Legislativo. La Comisión Mixta señaló también que el Consejo Legislativo había estado dispuesto a abolir el segundo voto por poseer bienes raíces, pero no la reducción de la edad mínima de los votantes.

198. El informe de la mayoría, firmado por cinco miembros, llegaba a la conclusión de que al Territorio le convendría introducir el "pleno gobierno responsable". Para lograr esto, la mayoría recomendaba un sistema ministerial y un gabinete. No recomendaba el empleo de estos términos, porque creía que esta nomenclatura podría sugerir la existencia de políticos profesionales dedicados exclusivamente a esta actividad. La Comisión Mixta prefería mantener los términos "miembro" y "Consejo Ejecutivo" continuando así el sistema de servicio público parcial que es "el más adecuado para las necesidades de Bermudas".

199. La mayoría recomendó que el Gobernador eligiera entre los miembros de la Asamblea a la persona que creyera más capacitada para ser el jefe de la mayoría en la Asamblea. Se le denominaría Jefe del Gobierno y sería el principal asesor político del Gobernador. Siguiendo las recomendaciones del Jefe, el Gobernador nombraría un mínimo de seis y un máximo de

nueve miembros del Consejo Ejecutivo y distribuiría las carteras entre ellos siguiendo el consejo del Jefe. No habría miembros *ex officio*. Por lo menos uno y no más de dos miembros deberían pertenecer al Consejo Legislativo. El Gobernador estaría obligado a obrar con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo en todas las cuestiones salvo las de defensa, relaciones exteriores, seguridad interna y asuntos referentes a la administración de la fuerza de policía, materias todas en las cuales el Gobernador retendría poder exclusivo.

200. Se mantendría el poder legislativo bicameral. El Consejo Legislativo estaría formado de 11 miembros nombrados por el Gobernador, cuatro por recomendación del Jefe, dos por recomendación del jefe de la oposición y cinco a su discreción "para representar una amplia gama de intereses de la comunidad". No habría miembros *ex officio*, pero el Secretario de la Colonia y el Procurador General se elegirían por nombramiento con la aprobación del Jefe. El Consejo Legislativo tendría poderes análogos a los que corresponden a la Cámara de los Lores en el Reino Unido, y podría demorar un proyecto en materia de hacienda durante tres meses y un proyecto de ley común durante dos años.

201. La mayoría recomendó también que se redujera la edad mínima de los votantes a 21 años y que se aboliera el segundo voto. Recomendó asimismo la creación de una comisión de límites cuya función sería la de hacer recomendaciones periódicamente al poder legislativo sobre la necesidad de efectuar cualquier cambio en las circunscripciones electorales. Entre otras recomendaciones figuraban la de colocar a las juntas de gobierno bajo la fiscalización de miembros del Consejo Ejecutivo y la de incluir en la constitución la independencia del poder judicial y una declaración de derechos.

202. El informe principal de la minoría, firmado por tres miembros, coincidía en todas las recomendaciones con el de la mayoría salvo en las referentes a la reducción de la edad mínima de los votantes y la abolición del segundo voto. El miembro que firmaba el segundo informe de la minoría estaba de acuerdo con el propósito del gobierno responsable pero no creía que hubiera llegado el momento de introducirlo. El tercer informe de la minoría proponía otro método para nombrar a los miembros del Consejo Legislativo, la abolición de las juntas de gobierno y algunas modificaciones respecto de la comisión de límites propuesta. El cuarto informe de la minoría rechazaba la recomendación básica de introducir el pleno gobierno responsable y la mayoría de las recomendaciones conexas.

203. En diciembre de 1965, la Asamblea y el Consejo Legislativo aprobaron el informe de la mayoría de la Comisión Mixta. El Consejo Legislativo aprobó el informe por 5 votos contra 4. En enero de 1966, la Asamblea aprobó un mensaje que se enviaría al Gobernador pidiéndole que se discutieran los cambios constitucionales.

204. El 12 de enero de 1966, una enmienda a la *Parliamentary Franchise Act* en que se proponía reducir la edad mínima de los votantes de 25 a 21 años y en que se abolía el voto adicional de los propietarios, que ya había sido aprobada por la Asamblea, fue adoptada en el Consejo Legislativo por 1 voto. Más tarde, el Gobernador consintió la enmienda.

205. Las atribuciones y disposiciones definitivas de una nueva constitución elaborada para el Territorio se-

¹⁹ La información que se presenta en esta sección se ha extraído de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 2 de septiembre de 1965, para el año terminado el 31 de diciembre de 1964.

rán negociadas en Londres con el Gobierno del Reino Unido por delegados nombrados por el Gobernador.

206. El Comité Central del Progressive Labour Party (PLP) sostiene que las opiniones de los trabajadores no están representadas efectivamente en el informe. En un comunicado de prensa declaró que se debía suprimir el Consejo Legislativo; que se debían celebrar sesiones nocturnas en la Asamblea en lugar de sesiones vespertinas, para que los trabajadores pudieran asistir; que se debía nombrar Gobernador a un natural de Bermudas; que se debían abolir las juntas de gobierno y que se debía suprimir el derecho de los que no fuesen naturales de las Bermudas a votar después de haber residido durante tres años.

207. Cinco miembros parlamentarios del PLP que no estaban de acuerdo con las opiniones del Comité Central fueron suspendidos en sus funciones en septiembre de 1965 y más tarde renunciaron a su condición de miembros, dejando al sexto miembro de los trabajadores como único representante del partido en la Asamblea. El antiguo jefe del partido, Sr. Arnold Francis, amenazó con formar otro partido, pero mientras tanto él y sus cinco colegas tratan de continuar en la Asamblea como miembros independientes.

208. El 11 de julio de 1966 se anunció que se celebraría en Londres, el 8 de noviembre de 1966, una conferencia constitucional sobre las Bermudas. Unos días más tarde el Gobernador nombró a los miembros de la delegación de las Bermudas. En su anuncio el Gobernador declaró que, según instrucciones del Secretario de Estado para las Colonias, la delegación tenía que estar compuesta exclusivamente por miembros del cuerpo legislativo.

209. La conferencia examinará el informe de la Comisión Mixta, aprobado por ambas cámaras legislativas en diciembre de 1965. La delegación de las Bermudas contará con los servicios de un asesor jurídico, Sir Ralph Hone, que llegó en julio a las Bermudas para celebrar conversaciones.

210. El Progressive Labour Party (PLP) ha declarado, según se informa, que en la Conferencia reclamará la independencia.

Condiciones económicas

211. La economía sigue dependiendo de la industria turística. A pesar de que en 1965 el número de turistas aumentó en un 25%, el porcentaje en el aumento de los ingresos en dólares del Territorio ha sido más reducido.

212. Se producen bananas, frutas cítricas, hortalizas, leche, huevos y carne para el consumo interno. El continuo crecimiento demográfico y el aumento correspondiente del número de viviendas y de parques de recreo ha hecho disminuir la extensión de terreno dedicada a la agricultura, que de 1.037 acres en 1963, ha pasado a 1.020 acres en 1964.

213. En las Bermudas hay una industria pesquera pequeña. Se calcula que cada año se consiguen 1.350.000 libras de pescado y 140.000 libras de langostas, de la familia de las Pallinuvidae, que representan un valor de 250.000 libras esterlinas.

214. En 1961 se fijó un índice de precios de venta al por menor, que se calcula trimestralmente. Si se toma como 100 el mes de enero de 1961, el índice correspondiente a octubre de 1964 fue de 103,4.

215. En 1964, las importaciones del Territorio se evaluaron en 30.885.509 libras esterlinas, inclusive las que entraron en el puerto franco de Ireland Island, mientras que la cifra correspondiente a 1963 fue de 29.645.286 libras. En 1964, las exportaciones de productos locales se evaluaron en 726.928 libras, en comparación con 831.429 en 1963, y las reexportaciones totales registradas ascendieron a 12.488.645 libras esterlinas, en comparación con 12.908.796 en 1963. Los ingresos procedentes de partidas invisibles, como inversiones e industria turística, hicieron que la balanza global de pagos resultara favorable.

216. Los ingresos y gastos en los años 1962, 1963 y 1964 fueron los siguientes:

	1962	1963	1964
	(En millares de libras)		
Ingresos	5.602	5.711	6.554
Gastos	5.691	6.342	6.385

217. Al no haber impuestos a los ingresos, las Bermudas atraen el registro de muchas compañías internacionales y en las islas hay considerable actividad bancaria y financiera.

Condiciones sociales

Mano de obra

218. En 1964, los trabajadores manuales del Territorio, con una semana laboral de 44 a 50 horas, ganaban de 6 chelines por hora (mujeres del servicio doméstico) a 13 chelines por hora (trabajadores de los muelles y electricistas). Las otras categorías de trabajadores, con una semana laboral de 34 a 42 horas, ganaban de 7/11 por hora (mensajeros) a 29/7 por hora (contables de categoría superior).

219. En 1964 había seis sindicatos registrados con arreglo a la Trade Union and Trade Disputes Act, 1946, ya que la Bermuda Union of Teachers y la Teachers' Association of Bermuda se fundieron el 29 de marzo de 1964. Hay también una Asociación de Funcionarios Públicos (Civil Service Association).

220. En 1964 ocurrieron cuatro conflictos laborales, que afectaron a 322 trabajadores y provocaron una pérdida de 285 días-hombre. Los estibadores y la Bermuda Dockworkers' Union firmaron un acuerdo de tres años que entró en vigor el 1º de enero de 1964, y la Passenger Transportation Board y la Bermuda Industrial Union firmaron un acuerdo que regiría hasta el 31 de diciembre de 1965 y que suponía un aumento de sueldo retroactivo desde el 1º de enero de 1964. Se inició una revisión de sueldos y una reclasificación de puestos en las plantillas de funcionarios públicos, con efectos retroactivos desde el 1º de enero de 1963.

221. En octubre de 1964, tras consultar al Comité Asesor en materia de relaciones del trabajo, el Gobierno hizo pública una declaración en la que se reconocía el derecho de sindicación a los empleados del Gobierno, siempre que un número "considerable" de los empleados interesados deseara estar representado por un sindicato, y que éste contara con el apoyo de la mayoría de los empleados.

Sanidad

222. En 1964, la tasa de mortalidad fue del 7,69 por mil, en comparación con 7,31 por mil en el año

anterior. La tasa de mortalidad infantil fue de 33,04 por mil nacimientos vivos.

223. Los gastos ordinarios de sanidad ascendieron a 895.793 libras esterlinas en 1964, en comparación con 712.732 libras en el año anterior. Hay cuatro hospitales, así como varias clínicas infantiles y femeninas, todo ello encomendado al Departamento de Servicios Médicos y Sanidad.

Situación de la enseñanza

224. En julio de 1965 se adoptó el principio de que la enseñanza fuera gratuita en todas las escuelas, para todos los niños dentro de los límites de edad obligatorios. Las escuelas públicas se dividen en "incorporadas" y "oficiales". Las primeras son administradas por comités locales, y las segundas administradas directamente por la Junta de Educación. Anteriormente la enseñanza era gratuita y, según se dispone en la *Education Act* de 1954, obligatoria para todos los niños de más de siete años y menos de trece. Esta disposición ha dado lugar a una nueva clasificación de las escuelas en escuelas gratuitas y en escuelas que siguen cobrando derechos de matrícula. Con arreglo a la *Education Act*, la Junta fijó límites de edad "de los cinco años al final del curso académico en que el niño cumpla los 16", entre los cuales los niños que asisten a escuelas gratuitas pueden recibir enseñanza primaria gratis. En las escuelas que todavía cobran derechos de matrícula, éstos varían según el tipo de escuela y, en algunos casos, según la posición del alumno en ella. Los derechos máximos ascienden a unas 195 libras esterlinas al año, que no cubren los libros ni el material de escritura, en el grado superior de una de las escuelas secundarias privadas.

225. Entre las escuelas gratuitas figuran cuatro escuelas incorporadas y 18 oficiales, y las escuelas que cobran derechos son, aparte de las privadas, ocho escuelas incorporadas que ofrecen enseñanza secundaria (cinco de ellas ofrecen también enseñanza primaria), tres escuelas secundarias oficiales y una escuela primaria incorporada. Hay también dos escuelas incorporadas que dan enseñanza primaria gratuita pero cobran derechos de matrícula en sus departamentos de enseñanza secundaria. Siete escuelas administradas por la Junta de Educación y otras tres escuelas ofrecen enseñanza secundaria hasta el certificado escolar o nivel "O" del examen del General Certificate of Education. En cuatro de esas escuelas se prepara a los alumnos para el certificado de enseñanza secundaria o nivel "A" del examen del General Certificate of Education. Hay nueve escuelas que dan cursos comerciales y una que da cursos de hostelería.

231. Además, la Friendship Vale School cuida de 75 niños con deficiencias físicas y hay tres escuelas especiales a las que asisten 175 niños de categorías especiales.

232. En las Bermudas no hay universidad. Hay un acuerdo con la Queen's University de Kingston, Ontario, Canadá, que envía conferenciantes a las Ber-

226. El Technical Institute tiene un programa de estudios generales al nivel secundario, de cuatro años de duración, al que sigue un programa de preaprendizaje de dos años. En esas escuelas se pagan derechos de matrícula, que varían de 6 libras por curso en la escuela práctica secundaria a 9 libras por curso en el Technical Institute.

Informe de la Comisión Mixta de Educación

227. El informe de la mayoría de la Comisión Mixta de Educación fue aprobado en la Asamblea el 8 de julio de 1966, por 19 votos contra 7.

228. Como ya se ha indicado (párr. 224) en julio de 1965 se adoptó el principio de la enseñanza gratuita para todos los niños dentro de los límites de edad obligatorios. Se señala que, con la aprobación del informe de la mayoría, la enseñanza será gratuita para todos los niños de las escuelas del gobierno, con excepción de las secciones "B" de las tres escuelas secundarias académicas. A esta limitación se opusieron varios miembros del Progressive Labour Party en la Asamblea.

229. En junio de 1966 la Amalgamated Bermuda Union of Teachers publicó una declaración en la que expuso su parecer sobre la enseñanza en las Bermudas. En ella recordaba que en 1961 y 1962 se habían divulgado cifras que indicaban las notas bajas registradas en las pruebas de inteligencia entre los niños de "las escuelas oficiales, es decir, las escuelas para niños de color", y que había llegado a la conclusión de que esos resultados, de singular pobreza, se debían a factores del medio y no a incapacidad innata. Dicha agrupación profesional había hecho las representaciones y recomendaciones del caso a la Junta de Educación y a la Comisión Mixta a fin de convencerlas de que el Gobierno tendría que intensificar sus esfuerzos para compensar las desventajas de dichos niños. Le sorprendía desagradablemente que el Gobierno hubiera "optado por una política que se impone a los países de extrema miseria, y no por la política que puede permitirse un país próspero como el nuestro". Como consecuencia de esa política, aumentaría el desnivel de educación entre la clase media y los grupos sociales inferiores y se produciría un desasosiego político, "cuya aparición no constituiría una sorpresa". La mencionada agrupación profesional estaba preparando nuevas recomendaciones "con la esperanza de que la inquietud de la opinión pública las haga ahora más eficaces que en lo pasado".

230. Las cifras de matrícula correspondientes a 1963 y 1964 son las siguientes:

	<i>Matrícula total</i>	<i>Muchachos</i>	<i>Muchachas</i>	<i>Menos de 7 años</i>	<i>Más de 13 años</i>
1964	12.161	5.923	6.238	2.493	2.926
1963	11.671	5.649	6.022	2.284	2.493

mudas todos los veranos para dar cursos a los maestros y estudiantes de magisterio que desean conseguir un título universitario.

233. En 1964, los gastos totales del Gobierno en la esfera de la enseñanza ascendieron a 1.054.126 libras esterlinas, en comparación con 1.081.789 durante el año anterior.

6. BAHAMAS²⁰*Información general*

234. Se levantó el último censo el 15 de noviembre de 1963. La población del Territorio a fines de 1964 se calculaba en 138.500 habitantes, de los cuales se estimaba que 83.837 residían en New Providence.

Situación política y constitucional

235. Durante el período que se examina siguió en vigor la Constitución de enero de 1964. Con arreglo a la misma el Gobernador dispone de facultades discrecionales en lo relativo a relaciones exteriores, defensa, seguridad interior y dirección de la policía. En otros asuntos el Gobernador actúa con asesoramiento del Gabinete, que está presidido por el Primer Ministro. El poder legislativo está constituido por un Senado, cuyos miembros son designados, y que tiene poderes limitados para retrasar la entrada en vigor de las leyes, y por una Asamblea cuyos miembros son elegidos. La próxima elección de miembros de la Asamblea debe realizarse antes de diciembre de 1967 y se llevará a cabo sobre la base del sufragio universal de los adultos.

236. En abril de 1965 los siete miembros pertenecientes al Progressive Liberal Party (PLP), presididos por el Sr. Lynden O. Pindling, boicotearon las reuniones de la Asamblea en señal de protesta contra el informe de la Comisión de Circunscripciones. El señor Pindling presentó peticiones sobre el particular al Comité Especial en abril de 1965 (A/AC.109/PET.377 y Add.1) y compareció como peticionario ante el Comité en sus 376a. y 377a. sesiones, celebradas en agosto de 1965 (véase A/6000/Rev.1, cap. XXIII, párrs. 86 a 111).

237. El 2 de septiembre de 1965 tres miembros del PLP pusieron fin a su boicoteo a la Asamblea. En carta de esa fecha dirigida al Presidente de la Asamblea, el líder del grupo, Sr. P. L. Adderley, explicó que, en opinión del grupo, no servía a los intereses del pueblo de las Bahamas el negarse a representarlo en la función para la que habían sido elegidos. Reafirmó asimismo la oposición del grupo al Gobierno por ser éste un "instrumento para la protección de los ricos y los privilegiados". El 4 de octubre estos tres miembros fueron suspendidos por el PLP, y el 13 de octubre anunciaron que habían formado un nuevo partido, el National Democratic Party (NDP).

238. El Secretario de Estado para las Colonias, Sr. Anthony Greenwood, visitó el Territorio en octubre de 1965 y celebró conversaciones con miembros del Gobierno y de los tres partidos de oposición, el PLP, el NDP y el Labour Party, cada uno de los cuales hizo públicas sus exigencias.

239. Las seis "condiciones principales" del PLP fueron las siguientes: 1) que se derogase la *Constitution's and Boundaries Order*, que el Presidente de la Asamblea renunciase a cualesquier afiliaciones a partidos políticos y que en lo futuro los decretos (*orders*) estuviesen sujetos a examen por los tribunales; 2) que se estableciese un mecanismo adecuado para precisar

y examinar los conflictos de intereses entre los miembros del Gabinete y para evitar que éstos efectuasen transacciones comerciales a nombre del Gobierno, consigo mismos; 3) que se volviese a negociar la *Hawksbill Creek Grand Bahama (Deep Water Harbour and Industrial Area) Act*, con miras a dejar sentado que el Gobierno era la autoridad suprema en la zona portuaria, que tenía en ella la misma autoridad que en todas las demás partes de las Bahamas, que garantizaba la libertad de expresión y de reunión para los habitantes de Freeport en general y para los sindicatos en particular, y que establecería una bolsa gubernamental de trabajo en la zona; 4) que se derogase la *Trade Union and Industrial Conciliation Act* y que se volviese a promulgar una ley en tal sentido para estipular la plena libertad de reunión, el reconocimiento automático de los sindicatos legalmente constituidos y la plena libertad para negociar la retención por el empleador de las cuotas sindicales y la inscripción obligatoria en los sindicatos; 5) que se celebrase una nueva conferencia constitucional para garantizar el gobierno de la mayoría, la representación de acuerdo con el número de habitantes, la plena aplicación de todas las disposiciones sobre derechos humanos, y las circunscripciones de representante único, y 6) que se nombrase una Comisión Real a fin de investigar el funcionamiento del Gobierno y la situación general de las Bahamas, o que se permitiese al Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas enviar un equipo de investigación al Territorio.

240. El NDP pedía que se efectuasen reformas constitucionales "que aseguren la formación de una base verdaderamente democrática sobre la cual pueda desarrollarse este país". Se pronunció por que se incluyesen en la Constitución disposiciones sobre los derechos fundamentales que se aplicarían en forma retroactiva a todas las leyes promulgadas desde que entró en vigor la nueva Constitución. De esta manera sería preciso modificar leyes tales como la *Trade Union and Industrial Conciliation Act* y la *Hawksbill Creek Grand Bahama (Deep Water Harbour and Industrial Area) Act*. El partido propuso también que se fijase la obtención de la plenitud del gobierno propio como objetivo inmediato. Pidió sin embargo que, antes de tomarse nuevas medidas de orden constitucional, se efectuase una distribución equitativa de escaños basada en la distribución de la población en todo el territorio de las Bahamas, que se creasen circunscripciones de representante único, que se hiciese una revisión completa de las leyes electorales a fin de emplear un "sistema más eficiente y menos complicado de registro y votación y asegurar que las votaciones se realizaran en absoluto secreto", y que se estableciese un sistema de sufragio por medio de símbolos.

241. El Labour Party hizo hincapié en cuatro "necesidades" fundamentales que deberían satisfacerse antes que las Bahamas disfrutasen de "todos los efectos del gobierno propio interno". Dichas necesidades eran las siguientes: a) poner fin al conflicto de intereses en las funciones parlamentarias mediante el pago a los Ministros del Gabinete y a los miembros de la Asamblea y la formulación de "normas de orientación sobre la conducta de los parlamentarios con respecto a sus inversiones, actividades comerciales y participación en empresas extraparlamentarias y comerciales"; b) el uso de símbolos en todas las papeletas de sufragio; c) el desarrollo económico y social, y d) la derogación

²⁰ La información que se presenta en esta sección se ha extraído de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 31 de agosto de 1965, acerca del año concluido el 31 de diciembre de 1964.

de la *Trade Union and Industrial Conciliation Act* y su sustitución por una ley más "moderna". El Labour Party estimó también que las próximas elecciones generales deberían estar supervisadas por las Naciones Unidas.

242. A su regreso al Reino Unido, el Secretario de Estado para las Colonias declaró el 3 de noviembre ante la Cámara de los Comunes que durante su visita había celebrado conversaciones con miembros del Gobierno, líderes de la oposición y otros representantes de la opinión pública). Afirmó que la Constitución de enero de 1964 funcionaba bien y que se felicitaba de comprobar la expansión del turismo, del cual dependía en gran medida la economía del Territorio.

243. El 29 de octubre de 1965 el NDP publicó una exposición de política que señalaba la orientación que seguiría el partido. Además de las reformas solicitadas en las conversaciones con el Secretario para las Colonias, en la plataforma del NDP se pedía "el pleno gobierno autónomo interno junto con una garantía en la Constitución acerca de la consulta al Gobierno del Reino Unido sobre todas las cuestiones de relaciones exteriores". El Partido pedía también que se extendiese el derecho de voto a todas las personas que hubieran cumplido 18 años de edad (en vez de 21 años).

244. El 5 de febrero de 1966 los cuatro miembros de la Asamblea pertenecientes al PLP decidieron poner fin a su boicoteo, que había durado nueve meses, y volver al cuerpo legislativo cuando éste reanudara sus sesiones el 10 de febrero. En una declaración el señor Pindling afirmó que su partido se había sentido alentado por la "magnífica respuesta" de las Naciones Unidas a la exposición que él hiciera ante el Comité Especial en 1965, y que regresaría a la Asamblea "todavía más decidido a continuar la lucha por un gobierno democrático". Manifestó que su partido tenía un programa legislativo destinado a exigir al United Bahamian Party, que se hallaba en el gobierno, que efectuase los cambios que él había solicitado ante las Naciones Unidas.

245. En junio de 1966, el Sr. L. O. Pindling (PLP) presentó un proyecto de ley para enmendar la *House of Assembly Elections Act*. Afirmó que las enmiendas servirían para remediar las "escapatorias" del *Act* y "pondrían de manifiesto al país y a todos los observadores que tenemos la intención de celebrar elecciones honradas y sin fraudes". Las enmiendas cumplirían varias finalidades, en especial ayudar al votante analfabeto; permitir una ampliación del período de votación cuando fuese necesario; evitar la corrupción causada por "posibles candidatos poco escrupulosos". Durante el debate los jefes de la oposición hablaron de la necesidad de una ley sobre las personas que dan o prestan dinero a los votantes para inducirles a votar o a abstenerse de votar y que evitase que las cédulas de votación fuesen empleadas como "títulos negociables".

246. El Sr. P. L. Adderley (NDP) convino en que era menester modificar el sistema completo de registro de votantes. Sugirió asimismo varias posibilidades, en especial que se ampliase el plazo de residencia en las Bahamas para que un súbdito británico, que no sea natural de las islas, pueda votar. Se refirió al gran número de súbditos británicos, no nacidos en las Bahamas, que tenían derecho a votar después de pa-

sar seis meses en el Territorio. Afirmó que debería obligárseles a que viviesen en las Bahamas por lo menos cinco años antes de que pudieran votar.

247. El Primer Ministro, Sir Roland Symonette (UBP), negó que hubiese habido corrupción durante las elecciones. Defendió la existencia de las cédulas de votación y afirmó que el Gobierno estaba perfectamente de acuerdo con la *Elections Act* y que personalmente no le encontraba ningún defecto. Fue rechazado el proyecto de ley presentado por la oposición.

248. El debate en el seno de la Asamblea sobre el discurso pronunciado por el Gobernador en nombre de la Corona en marzo y abril de 1966 permitió a los miembros de la oposición atacar la política con respecto a las condiciones en Freeport y la *Hawksbill Creek Gran Bahama (Deept Water Harbour and Industrial Area) Act*.

249. El Sr. Adderley (NDP) manifestó que era de lamentar que el Gobierno no hubiese conseguido el suficiente dinero de los juegos de azar de Gran Bahama para financiar la ampliación de la plantilla de policía que, según afirmó, se precisaba en dicha isla a causa del propio juego. Añadió que era inícuo que se pidiese a la población de las otras islas que pagase la protección policial de Gran Bahama cuando los empresarios de las casas de juego ganaban millones de libras y no pagaban impuestos similares. El Sr. Adderley preguntó el motivo de que se permitiera a los gangsters desplazarse a la colonia para ganar dinero al tiempo que se multaba fuertemente a los residentes por montar loterías ilegales. Admitió que Freeport había producido beneficios financieros a algunas personas, pero al mismo tiempo el Gobierno había "renunciado a su responsabilidad y cedido sus derechos soberanos sobre una parte del país a una compañía privada". Advirtió que muy pronto el Gobierno dejaría de controlar Freeport. Por tales razones se mostró partidario de que el Gobierno negociase inmediatamente un nuevo acuerdo con la Port Authority Company que controlaba Freeport. El Sr. Adderley deploró también la política de inmigración del Gobierno que, afirmó, había dado como resultado una insatisfacción general y además no había conseguido establecer los adecuados controles de inmigración en Freeport.

250. El Sr. Pindling (PLP) pidió que una Comisión Real investigase la situación del juego en Freeport. Manifestó que los acuerdos firmados con los empresarios de los casinos de Gran Bahama, y en virtud de los cuales pagarían 100.000 libras al Gobierno de las Bahamas, tenían como condición que sus libros "no se fiscalizasen en la localidad". El señor Pindling manifestó que el Ministro de Hacienda había negociado esa cantidad y no un porcentaje. Afirmó también que tres de los individuos relacionados con el juego en Freeport estaban reclamados por los Estados Unidos, pero gozaban de protección del Gobierno de las Bahamas. El Sr. Pindling pidió también al Gobierno que volviese a negociar el *Hawksbill Agreement* con la Port Authority Company. Atacando la política de inmigración del Gobierno, manifestó que al ir aumentando el número de puestos de trabajo, dos obstáculos aquejaban a los naturales de las Bahamas: falta de educación y falta de experiencia. Encareció al Gobierno a que estableciese lo que denominó "un fondo nacional en fideicomiso" de medio millón de libras, para "educar a nuestras gentes".

251. El 28 de abril de 1966, el Sr. Adderley propuso una resolución en la Asamblea por la que se fijarían leyes para establecer una comisión de control del Casino que controlaría el juego organizado en las Bahamas. La moción fue rechazada tras un largo debate. El Primer Ministro afirmó que el Gobierno disponía ya de suficiente control sobre el juego.

Condiciones económicas

252. La economía del Territorio sigue dependiendo del desarrollo de la industria turística. Como resultado de la intensa campaña de publicidad efectuada por el Ministerio de Turismo en los Estados Unidos y en el Canadá, el número de turistas que visitaron las Islas en 1964 ascendió a 605.171, en comparación con 546.404, 444.870 y 368.211 en los tres años anteriores.

253. Durante el año que se examina los gastos en nuevas construcciones y obras públicas ascendieron a 34.701.645 libras esterlinas, en comparación con 24.303.908 el año anterior. En el presupuesto aprobado para 1964 se incluía una suma de 1.239.023 libras esterlinas, en comparación con 1.109.107 en 1963.

254. Además de las pequeñas industrias mencionadas en el informe del año pasado (A/6000/Rev.1, cap. XXIII, párr. 48), existe también una industria de cestería, cuyas exportaciones de cestas, sombreros, esteras, bolsos de mano, etc., ascendieron a 9.055 libras esterlinas durante el año que se examina. Se calcula, además, que los turistas adquirieron artículos por un importe de 300.000 libras esterlinas.

255. En 1964 las principales exportaciones de las Bahamas ascendieron a 2.616.070 libras esterlinas, en comparación con 1.634.960 en 1963. La madera sigue siendo la partida de exportación más importante. Los principales compradores de las exportaciones del Territorio fueron el Reino Unido, el Canadá, los Estados Unidos y las Antillas Británicas. El valor de las importaciones en 1964 ascendió a 35.939.239 libras esterlinas, procedentes principalmente del Reino Unido, el Canadá, Australia, Nueva Zelandia, los Estados Unidos y Aruba; en 1963, el valor de las exportaciones fue de 28.264.936 libras.

256. En las Bahamas no existe el impuesto sobre los réditos, los impuestos indirectos son muy pequeños y las leyes que rigen los impuestos sobre las sociedades son liberales, circunstancias que han atraído un volumen considerable de inversiones extranjeras. Muchas de las inversiones se han efectuado en Freeport (Gran Bahama), que ocupa 210 millas cuadradas y cuenta con un puerto moderno y con instalaciones para carga de carbón, así como con un centro internacional de vacaciones y una comunidad residencial. Gracias a este capital extranjero y a los considerables ingresos invisibles procedentes de la industria turística las Bahamas tienen una balanza global de pagos favorable.

257. En 1964 siguieron aumentando los ingresos totales del Territorio, que llegaron a 12.160.000 libras esterlinas, en comparación con 9.600.000 libras en 1963 y 8.690.000 en 1962. Los gastos ascendieron en 1964 a 11.800.000 libras esterlinas. Los derechos de aduanas (6.875.000 libras esterlinas en 1964) y los ingresos procedentes de derechos y de servicios públicos siguen siendo las principales fuentes de ingresos.

258. El Gobierno de las Bahamas anunció que, en un esfuerzo para fomentar la economía e incrementar el ahorro nacional, proyectaba someter a finales de 1966 propuestas para la emisión de cédulas de ahorro del Gobierno.

259. El 14 de abril de 1966 se inauguró oficialmente el Atlantic Underwater Test and Evaluation Centre (AUTECH) en Andros. La base, un proyecto conjunto angloamericano, había estado en construcción durante los últimos dos años y su costo era entonces de 17 millones de dólares. Se espera que entre en pleno funcionamiento a últimos del año actual. Se le ha descrito como una "base submarina de lanzamiento de fines múltiples" y el "Cabo Kennedy de los océanos". El AUTECH tendrá tres polígonos: uno dedicado a armas, otro a acústica y otro al *sonar*. En él harán las pruebas definitivas de todos los nuevos sistemas de detección. Si bien la mayoría del trabajo realizado en AUTECH se centrará en la guerra anti-submarina, se ha señalado que los aparatos que se prueben no llevarán cargas explosivas. Esta fue una de las cláusulas del acuerdo firmado el 11 de octubre de 1963 entre el Reino Unido y las Bahamas y los Estados Unidos. La base, que tiene una superficie de 420 acres, contará con unas 400 personas, entre funcionarios civiles y de la marina.

260. En la Asamblea se ha criticado la decisión tomada por el Gobierno de emitir deuda pública por valor de 62 millones de dólares para financiar la ampliación del puerto y la extensión de los sistemas de comunicaciones y de distribución de agua. En marzo, se pidió al Ministro de Hacienda que explicase cómo se proponía pagar el servicio de la deuda sin provocar un aumento del costo de vida, un corte de los gastos destinados a servicios públicos o la aplicación de mayores impuestos indirectos a la gente pobre del país. El Ministro de Hacienda defendió su política afirmando que esperaba conseguir ahorros sin reducir la eficacia del Gobierno y sin recurrir a drásticas medidas impositivas.

261. El 12 de mayo de 1966 se convocó un período de sesiones especial de la Asamblea para presentar un proyecto de ley que prevé un empréstito de 14 millones de dólares para el Gobierno de las Bahamas (*Bahamas Development Loan Act*). Se explicó que el proyecto tendría que ser aprobado antes del 31 de mayo, o de lo contrario el Gobierno tendría que pagar una suma del 1%. El préstamo, destinado al desarrollo del puerto de Nassau, fue negociado con carácter privado con el Gobierno de los Estados Unidos, tenía un interés del 7% y debía ser reembolsado en quince años. El 14 de marzo se había anunciado la firma de un contrato de 18.840.000 dólares con una empresa de Nueva York para este fin.

262. En mayo de 1966 se anunció que se construiría en Freeport una fábrica de productos químicos por valor de 5 millones de dólares. La fábrica, cuya terminación está prevista para agosto de 1967, dará empleo a menos de 100 personas al principio, pero ese número aumentará a medida que amplíe sus operaciones.

263. También se anunció en mayo de 1966 que se había concedido licencia a la primera línea aérea de las Bahamas, proyecto que asciende a 50 millones de dólares. La empresa piensa iniciar el servicio entre Nassau y Luxemburgo el 1º de diciembre de 1966.

Se comunica que la financiación inicial ha sido concertada por un consorcio de banqueros internacionales.

264. En abril de 1966, el Primer Ministro anunció que "se había llegado a un acuerdo entre el Gobierno y Owens-Illinois respecto de la propuesta de esta entidad de cultivar caña de azúcar y producir azúcar refinado en la isla de Abaco". El Primer Ministro declaró que el Gobierno estaba seguro de que el Acuerdo redundaría en gran ventaja para el pueblo de Abaco y de las Bahamas en general, dado que la introducción de una nueva industria agrícola con la demanda consiguiente alentaría el desarrollo general de Abaco.

265. Se comunicó que el Ministro de Hacienda de las Bahamas manifestó, el 6 de mayo de 1966, que a su juicio sería sumamente difícil para cualquier compañía triunfar en la producción de azúcar en las Bahamas. Opinaba que si la operación azucarera de Abaco había de tener posibilidad de competir con las zonas mundiales de producción azucarera donde la mano de obra es barata, tendría que mecanizarse mucho. En estas condiciones, el Ministro no creía que pasasen de 500 las personas empleadas en toda la producción azucarera y en las fases de refinación de dicha empresa. "Por ello — añadió — aunque se trata de una contribución muy favorable a la economía de Abaco, no podemos, a mi juicio, prever empleo en gran escala merced a esta nueva industria."

266. El 9 de junio de 1966, el Primer Ministro presentó un proyecto de ley para que se autorizase al Gobierno a firmar el Acuerdo del Azúcar con la empresa Owens-Illinois de las Bahamas. En virtud del acuerdo, la Owens-Illinois produciría 50.000 toneladas de azúcar bruto al año, más una cantidad menor de azúcar refinado para el año 1969. El acuerdo dispone que la Owens-Illinois establezca una plantación de azúcar de 20.000 acres en Great Abaco, en Crown Land, terreno que posee en la actualidad en virtud de un arriendo a largo plazo para corte de madera, pero que ahora se otorgará a la compañía en arriendo no vinculado. En el acuerdo figura la opción a un máximo de 25.000 acres más, en arriendo por 25 años renovable anualmente, lo cual permitirá a la Owens-Illinois doblar su producción en lo futuro.

267. Durante el debate del proyecto de ley en la Asamblea, el Sr. Hanna, del PLP, declaró que no veía que el proyecto brindase protección alguna a los trabajadores de las Bahamas, ya que según la ley la compañía Owens-Illinois tenía derecho a importar personal sin consultar al Gobierno. Otro orador de la oposición atacó cualquier trato con la Owens-Illinois, a la que acusó de ser responsable de la muerte de más de 300 isleños de las Bahamas y de las Turcas, por injustas prácticas laborales en las Bahamas. Añadió que la escala de salarios impuesta a los empleados no sólo era inferior a la equivalencia de un salario vital, sino inferior también al de subsistencia.

268. El 25 de mayo de 1966, las Bahamas adoptaron el tipo decimal de moneda, pasando de la libra al dólar. Este se evalúa en 7 chelines de esterlina, o 98 centavos de dólar de los EE. UU.

Condiciones sociales

269. En general, los precios suelen ser elevados debido a lo limitado de la producción local. En las cifras del costo de vida, sobre las que se basan las

estadísticas locales, se incluye a los trabajadores de todas las clases y razas. El índice del costo de vida, tomando como base el año 1949, era de 174 al 30 de septiembre de 1964, en comparación con 169 el año anterior.

270. El 16 de junio de 1966, la Asamblea convino en nombrar un comité seleccionado para que examinase una resolución en la que se pide al Gobierno "la inmediata adopción de medidas para dominar el alza de precios, frenar el lucro ilegítimo y conservar el poder adquisitivo del trabajador". La resolución, propuesta por el Sr. L. O. Pindling (PLP), pedía también a la Asamblea que deplorase "el hecho de que el Gobierno no había tomado medida eficaz alguna para dominar el alza de precios y mantener el tipo de salario real". Al presentar la moción, el Sr. Pindling citó bienes en que se había registrado un "aumento sustancial". El Sr. Adderley (NDP) secundó la resolución del Sr. Pindling y dijo que el creciente costo de la vida planteaba una situación en que la gente vivía bajo la presión constante de subsistir.

271. El Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno no podía fijar tope a los precios y que, en todo caso, había que proceder a la debida investigación. Por ello, un comité mixto era el órgano adecuado para ocuparse de la resolución.

272. El 1º de julio de 1966, el Bahamas Trade Union Congress (BTUC) publicó un índice de precios al por menor. Según el índice, los alquileres en las Bahamas han subido el 126,23% en estos tres últimos años y el vestido el 69,26%. Entre otras alzas figura una del 54,22% en artículos diversos, que abarcan la entrada a espectáculos, los cigarrillos y el corte de pelo; otra del 36,16% en el precio de los alimentos, y otra del 33,19% en gastos de combustible (keroseno y electricidad). El BTUC afirma que desde 1963 el costo de la vida en las Bahamas ha subido el 71%. El índice ha sido enviado al Ministro de Trabajo, y se le cita como justificación del aumento general de salarios.

273. En carta enviada también al Ministro de Trabajo, el Bahamas Trade Union Congress decía: "No basta con que a los trabajadores de las Bahamas se les diga que estas islas disfrutan de mayor prosperidad que otras del Caribe. Como ciudadanos alertas, debemos además entender cómo y en qué medida la disfrutamos nosotros, los trabajadores de estas islas; nosotros, que con nuestro esfuerzo mental y la energía de nuestros músculos hemos contribuido tanto al actual grado de desarrollo de estas islas, y también a la estabilidad de nuestra economía." Para que las palabras "prosperidad o riqueza" tengan sentido — seguía diciendo la carta — el Gobierno y los empleadores deben intentar que el "sueldo vital" se distribuya entre los trabajadores de modo que les permita adquirir por lo menos lo fundamental para poder cubrir sus muchas necesidades. De éstas, las principales son alimento, el alojamiento y vestido que se requieren para seguir viviendo, y, dando un paso más, para atender a su desarrollo educativo, social y cultural y a su estado sanitario. "El Bahamas Trade Union Congress — proseguía la carta —, expresando el parecer de los trabajadores, presenta al Gobierno y a los empleadores de las Bahamas un Índice de Precios al Por Menor que mide la fluctuación del nivel general de precios entre septiembre de 1963 y junio de 1966." En vista

de los hechos que indica el índice de precios, el Bahamas Trade Union Congress instó al Gobierno y a los empleadores a conceder lo antes posible un aumento general de salarios.

274. El 15 de julio de 1966 se comunicó que el Ministro de Trabajo y Vivienda de las Bahamas había contestado la carta del BTUC, indicando varios errores en los métodos utilizados para calcular el índice de precios y terminando con estas palabras: "Confío en que advertirán ahora a sus miembros que la afirmación que hacen de que los precios han subido el 71% desde 1963 se basa en cálculos erróneos y no es fidedigna."

Mano de obra

275. En 1964 había en el Territorio un total de 16 sindicatos registrados, uno menos que el año anterior, y cuatro asociaciones patronales. Se produjeron dos huelgas que duraron en total 13 días. En 1963 la mano de obra estaba integrada por 60.000 personas, que en su mayoría trabajaban en la industria turística; 3.500 trabajadores se dedicaban a la pesca. En 1965 los Estados Unidos detuvieron la inmigración de trabajadores provenientes de las Bahamas, gracias a la cual se había obtenido en 1963 una suma neta de 1.799.836 dólares en concepto de remesas.

Sanidad

276. Los servicios médicos y de higiene dependen del Ministerio de Sanidad. Hay tres hospitales públicos principales, con un total de 800 camas. A principios de 1965 se iba a inaugurar un nuevo hospital para geriatría y para enfermos espásticos (125 camas), en el que se hará hincapié en la rehabilitación.

277. En 1964, la tasa de mortalidad del Territorio era de 7,23 por mil, y la tasa de natalidad de 33,8 por mil. La tasa de mortalidad infantil era de 42,7 por mil nacidos vivos. Las principales enfermedades son la tuberculosis, los trastornos respiratorios, los trastornos abdominales en general, la hipertensión y la malnutrición. Es inquietante el aumento de los casos de alcoholismo, causa importante de enfermedades.

278. En 1964 había el siguiente personal médico y sanitario: 84 médicos registrados (36 particulares), 1 médico autorizado (particular), 6 auxiliares de servicios médicos (particulares), 295 enfermeras (99 particulares), 53 enfermeras con formación profesional parcial (6 particulares), 269 parteras (95 particulares), 85 parteras con formación profesional parcial (63 particulares), 4 inspectores de sanidad del Gobierno, 16 técnicos de laboratorio y rayos X (2 particulares) y 89 farmacéuticos (80 particulares).

279. Los gastos de capital y gastos recurrentes del Gobierno en los servicios de higiene ascendieron a 1.226.424 libras en 1964, en comparación con 1.126.358 en 1963.

Situación de la enseñanza

280. La enseñanza se rige por la *Education Act* de 1962, y depende del Ministerio de Educación. Es obligatoria de los cinco a los 14 años.

281. En julio de 1964 el número de escuelas del Territorio era el siguiente:

	Primaria	Secundaria y postprimaria	Postsecundaria
Públicas	151 ^a	5	2
Subvencionadas ...	—	—	4
No subvencionadas.	42	8	6
	193	13 ^b	12

^a Inclusive 115 escuelas para alumnos de todas las edades.

^b Cuatro de ellas tienen sus propios departamentos de enseñanza primaria.

282. En 1964 había matriculados en las escuelas primarias 27.099 alumnos, en comparación con 27.435 el año anterior. La matrícula en las escuelas secundarias era de 7.034 alumnos, en comparación con 5.192 alumnos matriculados en 1963 en las escuelas secundarias o postprimarias.

283. No hay posibilidad de cursar estudios superiores en el Territorio. Para los estudiantes que desean continuar su instrucción a ese nivel se ha concertado un acuerdo especial con la University of the West Indies. Otros estudiantes se matriculan en instituciones de ultramar. El Gobierno de las Bahamas concede becas de estudio y becas especiales para ir a universidades y facultades extranjeras. No se dispone de cifras exactas sobre los estudiantes que cursan estudios en el extranjero, pero se sabe que en 1964 eran ellos 234, de los cuales 124 estaban en el Reino Unido, 10 en el Canadá y 100 en los Estados Unidos.

284. Los gastos del Gobierno en la enseñanza ascendieron en 1964 a 1.501.084 libras en comparación con 1.044.400 libras en 1963.

7. ISLAS TURCAS Y CAICOS²¹

Evolución política y constitucional

285. En el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. XXIII) se hizo notar que el Gobierno de las Bahamas había declarado que no podía aceptar por el momento la fusión que había sugerido el Gobierno de las Islas Turcas y Caicos. Se había convenido, no obstante, que los gobiernos interesados estudiarían la posibilidad de establecer una forma de asociación menos rígida.

286. Un decreto que entró en vigor el 5 de noviembre de 1965 contenía una reforma de la Constitución, en virtud de la cual el Gobernador de las Bahamas pasó a ser también Gobernador de las Islas Turcas y Caicos. Otra reforma preveía que los recursos contra las decisiones de los tribunales de las Islas Turcas y Caicos serían presentados ante el Tribunal de Apelación de las Islas Bahamas en vez del Tribunal de Apelación de Jamaica.

287. La designación del Gobernador de las Bahamas como Gobernador de las Islas Turcas y Caicos ha sido descrita en la prensa de las Islas Bahamas como un acto puramente administrativo y, según se informa, ha sido bien acogida en el Territorio.

²¹ La información sobre las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán (sección 8 *infra*) se ha extraído de informes publicados y de la información transmitida al Secretario General por el Reino Unido, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, el 2 de septiembre y el 11 de octubre de 1965, acerca del año concluido el 31 de diciembre de 1964.

288. Aparte de estos cambios, el régimen constitucional expuesto en el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXIV, párrs. 59 a 63) sigue estando en vigor.

Condiciones económicas

289. En 1964, las importaciones ascendieron a 300.768 libras esterlinas y las exportaciones a 47.173 libras, contra 300.000 y 73.000 libras esterlinas, respectivamente, en el año anterior. Las principales importaciones están constituidas por alimentos, bebidas, tabaco y artículos manufacturados. Los principales productos de exportación son la sal, por valor de 12.603 libras esterlinas en 1964 (37.000 libras en 1963); langostinos, 75.778 libras esterlinas (28.000 en 1963); sisal, 3.530 libras esterlinas; caracoles y conchas de caracoles. El subsidio total en 1964 fue de 159.116 libras esterlinas, en comparación con 139.483 libras en 1963.

Condiciones sociales

290. Los precios de los productos alimenticios básicos se han mantenido a un nivel alto, aunque razonable, en tanto que los demás, en particular las conservas de importación, son excesivamente caros. Por otra parte, debido a la fuerte carestía de viviendas en la Isla Gran Turca y el aumento de demanda originado por el establecimiento de las bases de los Estados Unidos en las islas, los alquileres han permanecido altos y tienden a aumentar.

Mano de obra

291. La Turks Islands Salt Company, Ltd., fue el principal empleador de mano de obra de las Islas hasta diciembre de 1964, fecha en que cesaron las actividades de extracción de sal en la Isla Caicos Meridional y la Isla Gran Turca. Los trabajadores que quedaron sin trabajo han encontrado otros empleos o han sido absorbidos por los programas de obras públicas. Las actividades de extracción de sal continúan en Salt Bay, donde trabajan regularmente alrededor de cuarenta y cinco hombres. Las dos bases de los Estados Unidos y la industria de pesca de langostinos y conchas proporcionan otras fuentes de empleo. Una compañía naviera de los Estados Unidos, la National Bulk Carriers, Inc., proporcionaba empleo en sus buques a unos ochenta hombres a fines de 1964. Muchos isleños siguen encontrando empleo en las Bahamas y sus remesas constituyen una fuente estable de recursos para sus familias.

292. En las Islas Turcas y Caicos sólo existe un sindicato registrado, el St. George's Union en Cockburn Harbour.

Salud pública

293. Hay dos médicos de sanidad, uno en la isla Gran Turca y el otro en la isla Caicos meridional.

294. La tasa media de mortalidad en las islas es aproximadamente de 5,1 por mil, dándose el porcentaje más alto entre los niños menores de un año. Los gastos ordinarios del Gobierno para salud pública y asistencia médica, incluido el costo del personal, fue de 22.321 libras esterlinas en 1964 (11,3% de los gastos públicos totales), en comparación con 27.409 libras en 1963 (9,5% de los gastos públicos totales).

Situación de la enseñanza

295. La instrucción es gratuita y obligatoria para todos los niños de 7 a 14 años de edad. En 1964, había 13 escuelas primarias, de las cuales una tenía una sección de enseñanza secundaria. En 1964 los gastos ordinarios para la enseñanza fueron de 22.027 libras, es decir, aproximadamente, el 11,2% del presupuesto total, contra 21.604 libras en 1963, es decir, el 7,5% del total de los gastos públicos. Además, el Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial costea la formación de maestros en Jamaica.

8. ISLAS CAIMAN

Evolución política y constitucional

296. El régimen constitucional descrito en el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones (A/5800/Rev.1, cap. XXIV, párrs. 80 a 84) sigue en vigor.

297. El 16 de noviembre de 1965 se celebraron elecciones generales, cuyos resultados se indican a continuación:

Partido	Escaños en la última Asamblea	Escaños en la nueva Asamblea	Pérdida o ganancia netas
Demócratas cristianos ..	5	4	1 menos
Demócratas nacionales ..	6	1	5 menos
Independientes	1	7	6 más

298. Según noticias de prensa, durante la campaña electoral se planteó la cuestión de si el Territorio estaba preparado para la autonomía interna. No se dispone de información sobre las posiciones adoptadas por los partidos políticos durante la campaña electoral.

Condiciones económicas

299. La economía del Territorio sigue dependiendo principalmente de los salarios ganados por los marineros isleños. El turismo se encuentra en fase de expansión. Se calcula que en 1964 visitaron las islas 3.319 turistas, contra 2.553 el año anterior. Otras industrias incluyen la fabricación de sogas y la pesca de tortugas y tiburones.

300. En 1964, el valor de las importaciones ascendió a 958.120 libras y el de las exportaciones a 39.900 libras, contra 838.886 libras y 34.490 libras respectivamente, en 1963. Aproximadamente dos terceras partes del comercio de las islas se efectúa con los Estados Unidos de América, y la mayoría de las importaciones provienen de este país. Las importaciones de azúcar, café, cemento, bebidas alcohólicas, keroseno y leche condensada provienen casi exclusivamente de Jamaica.

301. En 1964, los ingresos fiscales ascendieron a 299.856 libras esterlinas y los gastos a 296.606 libras, en comparación con 258.375 libras y 242.503 libras, respectivamente, en 1963.

Condiciones sociales

302. En 1963, el índice de precios al por menor en George Town, en la isla Gran Caimán, fue de 116, tomando como base 1959 igual a 100. Para la comparación se utilizó una serie limitada de varios artículos corrientes.

Mano de obra

303. En las Islas Caimán hay un sindicato registrado. La afiliación al mismo no está limitada a los marineros de las Islas Caimán, pero casi todos los isleños que están empleados en buques de propiedad estadounidense son miembros del sindicato. La cifra total de afiliados es de 6.099, de los cuales aproximadamente la tercera parte son isleños.

304. La tasa media de mortalidad en las islas es de 7,6 por 1.000. Las principales causas de defunción son hipertensión, enfermedades del aparato respiratorio, senilidad y enfermedades de la primera infancia. La tasa más alta de mortalidad (25,9 por 1.000 nacidos vivos) se da entre los niños de menos de un año de edad. Los gastos de sanidad ascendieron a 38.637 libras esterlinas en 1964, es decir, el 13% de los gastos públicos totales, en comparación con 34.473 libras en 1963 (para un período de nueve meses, de abril a diciembre), es decir, el 14,4% de los gastos públicos totales.

Situación de la enseñanza

305. La instrucción primaria es gratuita y obligatoria para todos los niños entre 7 y 14 años de edad. Durante el año que se examina funcionaban 11 escuelas primarias oficiales, una secundaria y una secundaria moderna, así como algunas escuelas religiosas. En 1964, el Gobierno se hizo cargo de la Escuela Secundaria de Caimán, que había estado regentada anteriormente por la Iglesia Presbiteriana Escocesa con una subvención del Gobierno. En 1964, los gastos ordinarios de enseñanza fueron de 42.354 libras esterlinas, lo que representó el 14,3% de los gastos ordinarios públicos, en comparación con 33.833 libras en 1963, que representaron el 14,7% de los gastos ordinarios públicos.

9. ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)²²*Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General*

306. En cartas de fecha 9 de febrero de 1966 (A/6261 y A/6262), los Representantes Permanentes de la Argentina y del Reino Unido transmitieron al Secretario General la parte pertinente de un Comunicado Conjunto emitido en Buenos Aires el 14 de enero de 1966 por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. En el comunicado se declara que ambos Ministros han acordado que las negociaciones recomendadas por la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General se prosigan sin demora por la vía diplomática o por aquellos otros medios que puedan acordarse a fin de encontrar una solución pacífica al problema.

307. En cartas de fecha 22 de agosto de 1966 (A/6261/Add.1 y A/6262/Add.1), los Representantes Permanentes de la Argentina y del Reino Unido trans-

mitieron al Secretario General el texto de otro comunicado conjunto, emitido el 20 de julio de 1966. En el comunicado se dice que hubo reuniones sobre el problema los días 19 y 20 de julio de 1966. Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente cordial y se convino que debían proseguirse.

10. HONDURAS BRITÁNICA²³*Condición jurídica*

308. El Gobierno de Guatemala ha seguido sosteniendo que la soberanía sobre Honduras Británica (Belice) corresponde exclusivamente a Guatemala y que el Territorio es parte integral de Guatemala. El representante de Guatemala así lo reiteró durante el decimonoveno período de sesiones de la Asamblea General²⁴. En la misma sesión, el representante del Reino Unido declaró formalmente que su Gobierno no abrigaba dudas acerca de su soberanía sobre el territorio y que reservaba plenamente su posición al respecto.

309. El 18 de noviembre de 1965 se anunció que un abogado de Nueva York, el Sr. Bethuel Matthew Webster, había sido designado por el Presidente de los Estados Unidos como Embajador, para que mediará en esa antigua controversia. El 24 de febrero de 1966 el Secretario de Estado para Relaciones Exteriores informó a la Cámara de los Comunes del Reino Unido que el Sr. Webster había convocado una reunión plenaria de los tres Gobiernos interesados y había visitado Guatemala y Honduras Británica. El Sr. Webster continúa celebrando consultas.

Acontecimientos políticos y constitucionales

310. Sólo se dispone de la información presentada por el Comité Especial en sus informes a la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimonoveno y vigésimo (A/5800/Rev.1, cap. XXVI; y A/6000/Rev.1, cap. XXV).

Condiciones económicas

311. Durante 1964 la industria de frutos cítricos continuó en expansión. En 1964 se produjeron casi 2 millones de cajas de naranjas y toronjas, en comparación con 1 millón de cajas en 1963. El valor de la producción de madera alcanzó a 3.100.000 dólares de Honduras Británica, o sea 500.000 más que en años anteriores²⁵. A principios de 1966 debía comenzar a funcionar una nueva central azucarera, con lo que se esperaba aumentar la producción total de azúcar a unas 150.000 toneladas. La producción de 33.591 toneladas de azúcar en 1964 excedió en unas 5.750 la cifra sin precedentes de 27.840 toneladas registrada en 1963.

312. Las cifras relativas al comercio total en 1962-1964 son las siguientes:

²³ La información presentada en esta sección se basa en los informes publicados y en la información de fecha 16 de julio de 1965, transmitida al Secretario General por el Reino Unido, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.

²⁴ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Sesiones Plenarias, 1301a. sesión*.

²⁵ La unidad monetaria es el dólar de Honduras Británica, que equivale a 5 chelines de libra esterlina o sea 0,70 de dólar de los Estados Unidos.

²² La información sobre el Territorio, correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 1964 y que el Reino Unido transmitió al Secretario General el 2 de junio de 1965, se tomó en consideración al preparar la sección informativa del capítulo relativo a las Islas Malvinas (Falkland Islands) del informe del Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones (A/6000/Rev.1, cap. XXII).

Año	Importaciones	Exportaciones de origen interno	Reexportaciones
(En dólares de Honduras Británica)			
1962	31.202.647	8.251.986	2.912.765
1963	26.500.000	15.400.000	3.000.000
1964	27.553.446	15.430.016	3.140.978

313. Los ingresos obtenidos localmente y los gastos del territorio durante el período 1962-1964 fueron los siguientes:

	Ingresos	Gastos
(En dólares de Honduras Británica)		
1962 (cifras efectivas)	9.217.702	11.958.069
1963 (cifras efectivas)	9.344.248	17.219.056
1964 (estimaciones)	8.348.075	15.262.888

314. Los subsidios otorgados por el Gobierno del Reino Unido en 1964 ascendieron a unos 700.000 dólares de Honduras Británica. Además, el Gobierno del Reino Unido suministró unos 995.000 dólares de Honduras Británica para la ejecución de los planes de Desarrollo y Bienestar del Commonwealth.

315. De los gastos estimados para 1964, 8.855.039 dólares de Honduras Británica fueron clasificados como gastos de carácter periódico y 6.407.494 fueron incluidos en la cuenta de capital.

316. En diciembre de 1965, el Ministro de Finanzas de Honduras Británica presentó a la Cámara de Representantes un presupuesto encaminado a estimular el desarrollo económico, reducir el costo de la vida y permitir que el Gobierno asumiera mayores responsabilidades, como corresponde a un país que pronto ha de ser independiente. Propuso que se establecieran nuevos impuestos sobre artículos suntuarios tales como los cigarrillos, el alcohol, los perfumes, las refrigeradoras, los automóviles y los receptores de radio y declaró que ningún país que se respete podía estar satisfecho en una situación de dependencia de la ayuda externa para sufragar sus gastos corrientes.

317. La Belize Chevron Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil Company de los Estados Unidos obtuvo licencia para realizar exploraciones en busca de petróleo que abarcan casi la totalidad de la región septentrional del Territorio.

318. En la Cámara de Representantes, se aprobó un proyecto de ley para obtener en el mercado interno y en el exterior un empréstito por valor de 1.200.000 dólares de Honduras Británica. Estos fondos se utilizarán para mejorar el suministro de electricidad en ciudades del interior, construir un puente en Tower Hill y continuar prestando ayuda, mediante préstamos y subsidios, a la edificación de escuelas secundarias. Esos proyectos forman parte del plan septenal de desarrollo.

319. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un comunicado de prensa de fecha 14 de enero de 1966, anunció que Gran Bretaña, Canadá y los Estados Unidos patrocinarían conjuntamente un estudio económico de Honduras Británica. En ese estudio se analizará la economía del Territorio y su po-

tencial de crecimiento y se sugerirán principios que sirvan de guía para su desarrollo durante los próximos cinco años. Los miembros del equipo serán suministrados por los tres países participantes. Se proyectaba iniciar el estudio en la primavera de 1966.

Condiciones sociales

Cuestiones laborales

320. A finales de 1964 había 10 sindicatos con un número total de afiliados que ascendía a 3.657, en comparación con 9 sindicatos y 3.507 afiliados a finales de 1963. En 1964 se firmaron 12 convenios colectivos, que afectaban las condiciones de trabajo de 2.874 trabajadores. Las nuevas *Government Workers Rules*, que regulan las condiciones de empleo de los trabajadores manuales gubernamentales, entraron en vigor en mayo y están vigentes desde el 1° de enero de 1964.

Sanidad

321. En 1964, los servicios médicos del Gobierno contaban con 19 médicos diplomados, 15 enfermeras principales, 61 enfermeras diplomadas, 15 enfermeras con capacitación parcial, 5 parteras principales, 15 parteras con capacitación parcial, 14 inspectores de sanidad, 3 técnicos de laboratorio y rayos X, 12 farmacéuticos, 2 radiógrafos, un administrador de hospital y un cirujano dental. Había 6 hospitales generales con 257 camas, 3 hospitales rurales con 59 camas y 17 dispensarios.

322. En 1964 los gastos de los departamentos de sanidad y medicina ascendieron a 15.262.888 dólares de Honduras Británica.

Situación de la enseñanza

323. En 1964, 26.322 alumnos asistieron a las escuelas primarias, en comparación con 26.449 en 1963; 2.113 asistían a las escuelas secundarias (2.186 en 1963) y 118 a una escuela profesional (85 en 1963).

324. En abril de 1964, por invitación del Gobierno, dos miembros del Instituto de Educación de las Indias Occidentales evaluaron el trabajo de las dos Escuelas Normales. Como resultado de esta cooperación, las dos Escuelas se han vinculado estrechamente no sólo con el Instituto, sino también con las escuelas normales de toda la región del Caribe.

C. EXAMEN POR EL COMITÉ ESPECIAL

Introducción

325. El Comité Especial trató de esos Territorios en sus sesiones 463a., 466a., 467a. y 476a. a 478a., celebradas los días 7, 14 y 15 de septiembre y del 14 al 16 de noviembre de 1966. En la 476a. sesión, el Relator del Subcomité III presentó el informe del Subcomité sobre esos Territorios, cuyo texto figura como anexo al presente capítulo.

Peticiones escritas y audiencias

326. El Comité Especial distribuyó las peticiones escritas siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Bahamas	
Sr. Randol F. Fawkes, miembro de la Asamblea Legislativa de las Bahamas y Presidente de la Bahamas Federation of Labour	A/AC.109/PET.544
Sr. L. O. Pindling, dirigente de la oposición y del Progressive Liberal Party (PLP) en las Bahamas ..	A/AC.109/PET.545
Bermudas	
Sr. W. G. Brown, Secretario General de la Bermuda Constitutional Conference	A/AC.109/PET.431 y Add.1
Sr. Walter N. H. Robinson, en nombre del Progressive Labour Party de las Bermudas	A/AC.109/PET.569
Honduras Británica	
British Honduras Freedom Committee de Nueva York	A/AC.109/PET.528
Coronel José Dolores Argueta Ruiz	A/AC.109/PET.553
Islas Malvinas (Falkland Islands)	
Sr. Enrique V. Corominas, Presidente de la Comisión Latinoamericana por la Restitución de las Islas Malvinas y Colonias Extranjeras (CLARIMCE) ..	A/AC.109/PET.455
Sres. Eustaquio Tolosa, Secretario General, y Luis Cortínez, Secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Obreros del Transporte	A/AC.109/PET.530
Sr. Esteban Belluci	A/AC.109/PET.554
Sr. Roberto Leonardi	A/AC.109/PET.555
Sr. Alfredo J. Graffigna, Director Gerente, LV1-Radio Colón	A/AC.109/PET.556
Sr. Enrique Pérez Sarmiento, Director General, y personal de la LV5-Radio Sarmiento	A/AC.109/PET.557
Dr. Ismael Moya y Sr. Luis Cortínez, en nombre del Comando Nacional para la Reconquista de las Malvinas e Islas Adyacentes ..	A/AC.109/PET.558
Granada	
Sr. E. N. Gairy, dirigente de la oposición en la Granada	A/AC.109/PET.446 y Add.1
Sr. M. A. Caesar	A/AC.109/PET.547 y Add.1
327. El Comité Especial oyó a los peticionarios siguientes en las sesiones que se indican a continuación:	
Granada	
Sr. E. N. Gairy, dirigente de la oposición (A/AC.109/PET.466)	463a. sesión
Bahamas	
Sr. L. O. Pindling, dirigente de la oposición y del Progressive Liberal Party (PLP) (A/AC.109/PET.545)	466a. y 467a. sesiones

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento</i>
Sr. Randol F. Fawkes, miembro de la Asamblea Legislativa de las Bahamas y Presidente de la Bahamas Federation Labour (A/AC.109/PET.544)	467a. sesión

Audiencia relativa a Granada

328. El Sr. Gairy, dirigente de la oposición en Granada, dijo que Granada poseía una población de alrededor de 90.000 habitantes, en su mayoría de origen africano; su extensión ascendía a unas 133 millas cuadradas, y era una de las cuatro islas que formaban el grupo de las Islas Windward, en la parte oriental de las Antillas.

329. El peticionario señaló que, a mediados de 1950, había fundado simultáneamente dos organizaciones distintas: un sindicato, la Grenada Manual and Mental Worker's Union, y un partido político, el Grenada United Labour Party (ULP). Los trabajadores agrícolas, 14.000 aproximadamente, constituían el grupo mayor del sindicato, que, a principios de 1951, contaba con unos 27.000 miembros. En enero de 1951, el sindicato había solicitado de los empleadores del sector agrícola que le reconociesen autoridad para negociar en nombre de los trabajadores agrícolas. A estos trabajadores se les pagaba 54 centavos por día, si eran hombres, y 44 centavos por día, si eran mujeres, y estaban obligados a trabajar entre 11 y 12 horas diarias en condiciones totalmente deplorables. Los empleadores habían amenazado con hacer aprobar una legislación que pusiere fin a las actividades de los dirigentes sindicales. El resultado había sido una huelga general, que se había realizado el 19 de febrero de 1951. El Gobierno de Granada y los empleadores habían solicitado ayuda del Reino Unido, que había enviado dos navíos de guerra y desembarcado tropas en el Territorio. Importantes fuerzas policiales habían acudido de Jamaica, Trinidad, Santa Lucía y Barbada, y gran cantidad de infantería de marina había llegado de Honduras Británica. Los trabajadores se habían dirigido entonces hacia la ciudad. El 20 de febrero de 1951, algunos dirigentes sindicales habían sido detenidos y encarcelados sin acusación concreta. El propio peticionario había sido detenido y enviado a Carriscou, donde había permanecido dos semanas y donde se había intentado hacerle firmar declaraciones obligándole a reconocerse responsable de las perturbaciones del orden y de los actos de violencia que habían ocurrido después de su detención. A pesar de las amenazas, el peticionario se había negado a firmar. El peticionario había sido enviado a Granada, donde había podido comenzar negociaciones con los empleadores del sector agrícola. Un tribunal de arbitraje compuesto de tres miembros había fallado en contra de los empleadores, y los salarios habían aumentado a 1 dólar para los hombres y a 72 centavos para las mujeres. También se habían mejorado las condiciones de trabajo.

330. En 1951, el Gobierno británico había concedido pleno derecho de voto a los adultos en Granada y las demás islas de las Windward y Leeward; en Granada se habían celebrado elecciones en virtud de las cuales el Grenada United Labour Party, partido del peticionario, había obtenido seis puestos de los ocho que estaban en juego. Durante dos años y tres meses, el peticionario había sido objeto de una constante vigilan-

cia policial dondequiera se encontrase. A pesar de esa actitud provocativa, imputable a la Oficina de Colonias del Reino Unido, el partido del peticionario, en las elecciones de 1954, había conseguido siete puestos de los ocho que se disputaban.

331. En 1955, el peticionario había seguido en el Reino Unido un curso sobre procedimiento parlamentario y obtenido el título de *Fellow* de la Royal Society of Arts; durante ese período, había proseguido sus actividades con el propósito de defender la libertad, suprimir la injusticia y elevar el nivel social y económico de los habitantes de Granada.

332. Al mismo tiempo, la Oficina de Colonias había continuado intentando obstaculizar las actividades del peticionario y, al celebrarse las elecciones generales de 1957, pese a que el peticionario era uno de los candidatos electos de su partido, había sido acusado de haber acompañado a una banda de música con instrumentos de percusión que deambulaba por la calle en que un candidato de la oposición efectuaba una reunión política. El peticionario había sido condenado a pagar una multa de 80 dólares, había tenido que renunciar a su puesto en el Consejo Legislativo y había perdido su derecho a votar. Durante cinco años, no había podido ser ni elector ni candidato.

333. En febrero de 1961, el partido del peticionario había obtenido ocho puestos de los diez que estaban en juego, pero el Sr. Gairy había seguido privado de sus derechos políticos. Sin embargo, su partido, que conocía su experiencia política y no olvidaba su participación en las conferencias de la Federación de las Antillas, lo había nombrado consejero especial para que asistiese a una conferencia de la Federación de las Antillas Orientales, en Londres, donde había podido plantear la cuestión de sus derechos políticos, que le fueron restituidos en junio de 1961. Poco después, en septiembre de 1961, el peticionario había llegado a ser Ministro principal.

334. En febrero de 1962, la Oficina de Colonias había solicitado que se llevase a cabo una verificación de los gastos realizados durante los cuatro meses en que el peticionario había actuado en la jefatura del Gobierno, en 1961, a pesar de que aún no se había presentado al Consejo Legislativo el informe de comprobación de cuentas correspondiente a 1960. De hecho el informe de 1960 jamás había sido presentado al Consejo Legislativo, según disponía la ley, y, hasta el momento, la Oficina de Colonias del Reino Unido no había adoptado ninguna medida al respecto.

335. Se había hecho una investigación, de unas siete semanas de duración, sobre las cuentas del gobierno del peticionario, encomendada a varios juriconsultos y a un ex juez a quien, según se decía, se había prometido un empleo si lograba recomendar que se eliminase del poder al gobierno del peticionario. La investigación no había revelado ninguna defraudación. Pese a ello, la comisión investigadora había criticado "la política" del gobierno del peticionario y lo había acusado de despilfarro. Además, según los investigadores, el peticionario no había solicitado autorización del Gobierno Federal para destinar a la construcción de carreteras fondos pertenecientes a Granada. Asimismo, se lo había acusado de amueblar su residencia de una manera exageradamente lujosa. Como resultado de dicho informe, la Oficina de Colonias había disuelto el gobierno del peticionario en junio de

1962. El juez que había presidido la comisión investigadora, por su parte, había sido nombrado *Chief Justice* de las Islas Windward y de las Islas Leeward.

336. Algunas semanas antes de la disolución del gobierno del peticionario, las colonias británicas de las Antillas Orientales habían formado una Federación de las Antillas Orientales, cuya capital había quedado situada en Barbada.

337. Tres meses más tarde, el 13 de septiembre de 1962, se habían celebrado en Barbada nuevas elecciones generales. En el padrón electoral de 1961, figuraban 41.000 personas inscritas: 17.000 nombres habían sido tachados y se habían agregado 10.000 nombres ficticios. No se había tomado ninguna medida para corregir esto. De la exposición de tales hechos, se desprende que la Oficina de Colonias no había escatimado esfuerzo alguno para poner fin a las actividades del peticionario y a las de su partido, incluso en perjuicio de la población de Granada.

338. Cuando se habían celebrado las últimas elecciones generales, en 1962, el partido que había asumido el poder se había comprometido a unir Granada a Trinidad y Tabago en el curso de un año. Durante los primeros meses que habían seguido a su elección, ese partido había hecho todo lo que había podido para persuadir a la población de que su promesa era sincera. El Gobierno de Trinidad y Tabago había creado cinco comités, que se habían trasladado a Granada en varias ocasiones para convencer a la población de que respetaban sus compromisos. El gabinete del Ministro principal de Granada había publicado un folleto titulado *Keeping Faith*, en el cual se señalaba el progreso realizado hacia la unión de Granada con Trinidad y Tabago. El peticionario dio lectura a algunos pasajes de dicho folleto, que puso a disposición de los miembros del Comité. Para persuadir con mayor firmeza a la población de que la labor de unir Granada a Trinidad y Tabago era la primera obligación del Gobierno respecto del país, el Ministro principal había rehusado todas las invitaciones dirigidas a su gobierno para que participase en una conferencia con las demás islas de las Antillas. El Gobierno se había mostrado firme en cuanto al mandato que había recibido de sus electores de establecer un solo Estado compuesto por su país y Trinidad y Tabago; se había descartado cualquier otra forma de asociación.

339. En virtud de la impotencia del Gobierno para cumplir los compromisos contraídos la población de Granada había reunido de 20.000 a 25.000 manifestantes, que habían reclamado elecciones generales. Miles de ciudadanos de Granada habían firmado peticiones, resoluciones y memorandos en los que solicitaban del Gobierno británico que organizase elecciones generales debido a que el partido que ocupaba el poder no había cumplido su compromiso. En todos los casos, dichas solicitudes habían sido rechazadas.

340. En diciembre de 1965, cuando se había enviado un telegrama a Granada y a las Islas Leeward y Windward con el propósito de recomendar la adopción de una nueva constitución, 21.000 personas en Granada habían firmado un documento negándole al Gobierno actual el derecho de negociar una nueva constitución sin el consentimiento de la población. El pueblo de Granada estimaba que el Gobierno actual tenía el mandato de llevar al Territorio a constituir un Estado unitario con Trinidad y Tabago. No estaba

facultado para discutir, en nombre del pueblo, una constitución del tipo ofrecido a Granada.

341. La idea de un gobierno unitario significaba que Granada abandonaría toda autonomía y se vería absorbida por el Gobierno de Trinidad y Tabago. No era este el caso cuando se trataba de una asociación de Estados o de una federación. Además, la nueva constitución propuesta no solamente permitía a Granada conservar la autonomía de que disfrutaba, sino que por primera vez le concedía el derecho de decidir sus asuntos internos. Una vez más, los 21.000 habitantes de Granada que reclamaban elecciones generales habían tropezado con la negativa del Reino Unido. El Grenada Trade Union Council comprendía cinco sindicatos muy poderosos. Todos ellos habían adoptado una resolución, de la cual habían enviado copias al Administrador, solicitando que las elecciones generales se celebrasen antes de adoptar la nueva constitución. El Youth Movement, que agrupaba a la juventud del país, y la Grenada Manual and Mental Worker's Union habían hecho lo mismo, pero no se había adoptado medida alguna.

342. El 18 de abril de 1966, se había celebrado en Londres una conferencia para examinar la nueva Constitución de Granada y de las Antillas Orientales. Habían participado en ella representantes del Gobierno y del partido de la oposición. Como se deducía del informe sobre la Conferencia Constitucional de las Islas Windward, se habían introducido importantes modificaciones en la Constitución de Granada.

343. La población de Granada estaba hondamente preocupada. Permitir que se adoptara semejante constitución, que implicaba modificaciones tan importantes de un plumazo, representaba no solamente un insulto a la democracia y a la población de Granada, sino una violación por parte de la Potencia Administradora de los Artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas.

344. El peticionario pidió encarecidamente al Comité Especial que recomendara la organización de elecciones generales en Granada y que colocara dichas elecciones bajo la fiscalización de las Naciones Unidas. Asimismo, el peticionario rogó al Comité que pusiera fin a esta explosiva situación, que indudablemente había de originar una catástrofe si no se adoptaban con rapidez las medidas pertinentes. Las Naciones Unidas eran de todos conocidas por la ayuda que concedían a los países coloniales y por su deseo de mantener la paz mundial. En consonancia, correspondía que salvaran a las Antillas de la peligrosa situación en que se encontraban.

345. El peticionario estaba convencido de que el cuadro objetivo de la situación que había intentado presentar bastaría para que el Comité le prestara atención y para que adoptara algunas medidas, teniendo en cuenta que la oposición había dirigido un informe a la Conferencia Constitucional de Londres y que si las autoridades procuraban privar a la pacífica población de Granada de los derechos que les corresponden según la Carta de las Naciones Unidas, la sospecha que el pueblo experimentaba con respecto a la democracia iba a alcanzar proporciones gigantescas. No se debía mutilar la democracia para satisfacer las conveniencias egoístas de uno u otro partido. En efecto, cuando se trataba de principios democráticos no se podía transigir sin destruir tales principios.

346. Finalmente, el peticionario deseaba subrayar que toda tentativa de imponer la nueva constitución sin elecciones generales, en esta época en que tanto se hablaba de libertad y de democracia, constituiría la más vergonzosa negación de la justicia.

347. En contestación a una pregunta sobre las razones por las que no había podido llevarse a cabo el proyecto de federación de las Antillas Orientales, el peticionario dijo que el fracaso se debía a varios motivos cuya explicación sería muy larga. Cuando los representantes de los ocho territorios — Barbada, las tres Islas Leeward y las cuatro Islas Windward — se habían reunido en Londres en 1962, deseaban saber, entre otras cosas, qué asistencia económica y técnica estaba dispuesto a concederles el Gobierno británico. Pero éste, en realidad, se había negado a precisar el monto de esa asistencia y algunos de los dirigentes se habían sentido muy decepcionados. Además, tras las elecciones que se habían celebrado en 1962 en Granada, el Gobierno británico había autorizado al partido que estaba en el poder a que negociara con Trinidad y Tabago la creación de un Estado unitario, de modo que Granada se encontraba excluida de la federación proyectada. De los diez territorios que debía comprender la federación inicial, ya no quedaban más que siete puestos que se habían retirado sucesivamente Jamaica, Trinidad y Tabago y Granada. Luego, Barbada había pensado que podía independizarse por separado, Santa Lucía había estimado que no se había respetado el acuerdo inicial, y Antigua, por su parte, se había pronunciado a favor de una constitución mejor que implicase la independencia. Por lo tanto, podía decirse que uno de los motivos principales había consistido en que el Gobierno británico no había anunciado en 1962 el monto de la asistencia que concedería, y que los representantes de los territorios no habían querido comprometerse a adherir a una federación pobre. Las negociaciones iniciadas entre el Gobierno de Granada y el de Trinidad y Tabago con respecto a la formación de un Estado unitario habían desencadenado luego el proceso de desintegración de la idea de federación.

348. Al preguntársele si, cuando Granada se había retirado, ya se habían efectuado progresos constitucionales hacia la formación de una federación, dijo que en la Conferencia Constitucional de Londres de 1962 se había examinado un proyecto de constitución que se refería a los ocho territorios. Luego el Gobierno de Barbada había redactado y presentado un Libro Blanco. Los representantes de los territorios estaban plenamente dispuestos a aceptar una transacción y a hacer ciertas concesiones a fin de establecer una federación.

349. En contestación a una pregunta sobre los motivos o los obstáculos que se opusieron a que el Ministro principal cumpliera su programa electoral con respecto al proyecto de asociación de Granada y Trinidad y Tabago, recordó que el Gobierno británico se había negado con razón, a su juicio, a conceder la subvención de 61 millones de dólares que había pedido el Primer Ministro de Trinidad y Tabago para asociarse con Granada. Además, la población de Granada estimaba que estaba en condiciones de emplear ese dinero y que no había ningún motivo para dárselo a Trinidad y Tabago. Por su parte, la población de Trinidad y Tabago no era partidaria de la adopción de

Granada. La creación de un Estado unitario no consistía simplemente en firmar documentos sino necesariamente en reunir poblaciones. Al cabo de un año, se tenía la impresión de que la asociación no era realizable ni deseable. En la Conferencia que se había celebrado en Londres en abril de 1966 el Ministro principal de Granada, que se encontraba en una situación bastante delicada, no había dicho una sola palabra acerca de la creación de un Estado que uniese a Granada y a Trinidad y Tabago. Los habitantes de Granada estaban convencidos de que el Gobierno de Granada y el Gobierno británico tenían la obligación moral de consultar al país antes de promulgar una nueva constitución.

350. En contestación a una pregunta acerca de las reservas que había formulado a las nuevas propuestas constitucionales, aprobadas en Londres, el peticionario dijo que su partido tenía reservas con respecto a todos los párrafos y artículos relativos al periodo de transición previo a la aplicación de la nueva constitución. Se referían asimismo a la cuestión de la composición de las dos cámaras de que constaría el órgano legislativo. En efecto, se preveía un parlamento con diez miembros elegidos y un senado con nueve miembros designados. El United Labour Party estimaba que debía consultarse primero a la población. Luego, debía crearse un órgano que determinara las atribuciones de cada cámara, el número de asientos de la cámara elegida y el número de circunscripciones. Por otra parte, el número de miembros de la cámara elegida debería determinar hasta cierto punto el de los miembros del senado.

351. En contestación a varias preguntas sobre los partidos políticos y su posición respectiva, dijo que en Granada existían dos organizaciones políticas, el Grenada National Party (GNP), que estaba en el poder, y su propio partido, el Grenada United Labour Party (ULP). Este último trataba de seguir una política social de conformidad con los principios democráticos y con plena conciencia de la necesidad de adaptarla a las estructuras propias de los pequeños territorios. Se oponía a los dogmas y a los principios anticuados del colonialismo y era hostil a toda ideología subversiva. En cuanto al partido que estaba en el poder, era difícil decir cuál era su política. Servía a los intereses de los grandes hombres de negocios, de los grandes terratenientes y de los comerciantes. No tenía una política bien definida. Su propio partido era partidario de la federación, que, a su juicio, era el único medio de resolver los problemas económicos de los territorios del Caribe. El propio peticionario había propuesto que se empezara por una pequeña federación que agruparía a los ocho territorios anteriormente mencionados, que formarían un núcleo al que se unirían casi inevitablemente Trinidad y Tabago y Jamaica. Hasta preveía un proyecto más ambicioso que comprendería otras regiones tales como las Antillas Holandesas — Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, etc. —, las islas francesas de Martinica y Guadalupe e incluso Puerto Rico. Si quería salvarse al Caribe, debía empezarse por crear ese núcleo de federación. Pero la idea de un Estado unitario que conduciría a la renuncia total de la autonomía de un país para fundirse con otro país le parecía impracticable. No sería justo que la población de un país adoptase a otro país más pequeño. En este caso, Trinidad y Tabago no constituían un país rico, y tenían sus propios problemas económicos

y políticos que resolver. En la nueva constitución que estaba a punto de promulgarse se preveía la asociación con el Reino Unido, pero ello no excluía la posibilidad de que los territorios se agruparan formando una federación o una asociación. Personalmente, el peticionario preferiría una federación que tuviese un centro sólido, y esa era también la opinión de su partido. Uno de los motivos del fracaso de la federación de las Indias Occidentales era que esa idea no había sido defendida por sus mejores partidarios. Por otra parte, esa federación era demasiado vulnerable. Por eso, el peticionario y su partido seguían prefiriendo un centro federal sólidamente constituido.

352. Al explicar las razones por las que había sido destituido del cargo de Ministro principal en 1962, el peticionario dijo que, cuando su partido había llegado al poder, los terratenientes, los comerciantes y cierta "cofradía" que controlaba anteriormente los asuntos del país habían hecho causa común para convencer al Administrador que el Gobierno no podría sostenerse mucho tiempo. Por otra parte, el Gobierno del peticionario se había visto obligado a aumentar ciertos impuestos y a crear otros nuevos, lo que había provocado el descontento de las categorías anteriormente citadas, que se habían quejado al Administrador y al Gobierno del Reino Unido. Además, el peticionario había podido comprobar que varias sociedades importantes que debían al tesoro sumas considerables (12.000, 17.000, 33.000 dólares, por ejemplo) compraban a precios irrisorios a los habitantes más pobres las casas que éstos no podían conservar por encontrarse en la imposibilidad de pagar sus impuestos. El peticionario había conseguido entonces la lista de los principales deudores del Estado y había pedido al *Attorney General* que interviniese para recuperar las sumas adeudadas. Pero este último también pertenecía a la "cofradía". Cuando el *Attorney General* había prevenido a sus colegas, algunos hombres de negocios habían tratado de sobornar al peticionario para que se suprimieran sus nombres de la lista. Ante la conducta del *Attorney General*, el Gobierno había tenido que recurrir a los servicios de un jurista independiente, lo que había permitido, al cabo de seis semanas, recuperar 200.000 dólares de impuestos atrasados.

353. Bajo la presión de los grupos anteriormente citados, el Administrador había abierto una encuesta sobre la gestión del Gobierno. La comisión de encuesta, ante la cual el orador se había negado a comparecer, había recomendado al Ministerio de Colonias que disolviese el Gobierno de Granada. Entre los motivos invocados figuraba especialmente la compra de un piano de 3.500 dólares. El informe de la comisión, que por otra parte sólo se refería al periodo durante el cual el peticionario había estado en el poder, señalaba que se había gastado una suma de 34.000 dólares sin las debidas autorizaciones, como había mencionado anteriormente. El Gobierno había sido disuelto por motivos de esa índole, cuando en 1960 el Ministro que estaba en el poder no había podido justificar el empleo de 803.945 dólares, y no se había adoptado hasta el momento ninguna medida contra ese Ministro. En conclusión, el peticionario estimaba que su Gobierno había sido disuelto porque se negaba a servir los intereses de los hombres de negocios, de los terratenientes y de los aristócratas que actuaban por conducto de la organización agrícola de Granada y de las cámaras de comercio.

354. Al preguntársele si el pueblo había sido consultado de alguna manera acerca de la nueva constitución, el peticionario contestó que la constitución vigente sólo confería a los representantes elegidos facultades limitadas. Mientras que Granada no tenía más que un Ministro principal, en la nueva constitución se preveía un Primer Ministro con facultades reforzadas. En realidad, la autoridad estaba en manos del Administrador, que representaba a la Reina y a quien estaban reservadas muchas facultades. Con arreglo a la nueva constitución, el Administrador se transformaría en "Gobernador" y sólo tendría un papel muy reducido, mientras que el representante elegido por el pueblo sería prácticamente el verdadero jefe del país. El pueblo había sido consultado y había acogido favorablemente la nueva constitución por considerar que era un paso hacia la libertad, pero había pedido que se le diera la oportunidad de elegir el partido político que debería gobernarlo. Pero el Gobierno británico había hecho caso omiso de ese deseo.

355. Por lo que respecta a las futuras posibilidades de una federación, el peticionario declaró que, en las conversaciones que había mantenido con varios dirigentes y con jefes de la oposición en el Caribe, había tenido la impresión de que subsistía la esperanza de organizar una federación. Entre sus interlocutores, sin embargo, varios habían estimado que la nueva constitución debería conceder mayor autonomía a las autoridades locales para que pudiesen discutir el tipo de federación que desearían. No cabía duda de que esa federación tendría más posibilidades de éxito si los propios interesados tratasen de lograr la fórmula adecuada. Por otra parte, el peticionario tenía motivos para creer que otros gobiernos extranjeros estarían más dispuestos a proporcionar ayuda a las islas si éstas pudiesen reunirse en un solo Estado.

356. El representante del Reino Unido, comentando la declaración del peticionario, dijo que había poco desacuerdo entre éste y la delegación del Reino Unido, especialmente en cuanto a la situación actual y el porvenir de Granada. No quería comentar sobre algunas cuestiones planteadas por el Sr. Gairy, pues eran de orden puramente interno y competían al Gobierno de Granada, que era elegido por sufragio universal de los adultos y era responsable ante el cuerpo electoral. Recordó que las medidas adoptadas en 1962 habían dado origen a una investigación detenida e imparcial, llevada a cabo bajo la dirección de un juez de las Antillas, que había puesto de relieve grandes irregularidades financieras y graves inexactitudes.

357. Añade que como su delegación se ocuparía detalladamente en las cuestiones constitucionales en el Subcomité III, de momento se limitaría a formular tres observaciones: primero, que en 1962 se habían celebrado elecciones generales y, en virtud de la constitución, el mandato de la Asamblea Legislativa duraría hasta octubre o noviembre de 1967. Aunque, como jefe de la oposición, el peticionario fuera partidario de que se celebraran elecciones anticipadas, la cuestión incumbía constitucionalmente al Ministro principal; no existía ninguna circunstancia especial que justificase una intervención en los procesos anuales. Segundo, el peticionario y el Ministro principal, es decir, los dirigentes de dos partidos políticos, en la Asamblea Legislativa habían firmado el informe de la conferencia constitucional y estaban totalmente de acuerdo sobre el principio de las nuevas propuestas constitucionales. En

consecuencia, no existían entre los partidos políticos divergencias fundamentales que justificasen el recurso al cuerpo electoral para este asunto. Tercero, el peticionario había votado recientemente a favor de una resolución en que se aprobaban las propuestas constitucionales. Las reservas que había formulado se referían principalmente a la fecha de las elecciones.

358. Dijo que su delegación pensaba que la principal razón de que aún no se hubiese logrado un acuerdo para una nueva federación de las Islas Windward y Leeward era la divergencia de opiniones entre los Gobiernos de las diferentes islas con respecto a las atribuciones del gobierno central federal y a su relación con las unidades territoriales que integrarían la federación.

359. El Gobierno del Reino Unido había reconocido siempre la necesidad de ayuda exterior a la nueva federación, y había prometido seguir asistiendo a toda nueva federación en igual medida, por lo menos, que a las islas en particular. Había convenido en discutir la cuestión de la ayuda financiera en una conferencia propuesta para 1965, pero esa cuestión no pudo ser abordada por no haberse podido lograr un acuerdo entre los diversos territorios sobre los problemas constitucionales. En cuanto a las futuras relaciones de Granada con otros países, a su población y a su Gobierno elegido incumbía determinarlas, y nada había en las recientes propuestas constitucionales que les impidiese hacerlo.

360. En conclusión, el orador estimaba que no se trataba de imponer una constitución al pueblo de Granada, ya que las nuevas propuestas en estudio en ese momento habían sido elaboradas en cada etapa con pleno acuerdo de los representantes elegidos de la población.

361. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que, contrariamente a lo que afirmaba el representante del Reino Unido, la constitución no se basaba en los deseos de la población, como, por otra parte, lo había señalado el peticionario. En definitiva, era a la propia población a quien correspondía decidir su porvenir.

Audiencias referentes a las Islas Bahamas

362. El Sr. Pindling, jefe de la oposición y del Progressive Liberal Party (PLP), recordó al Comité Especial la petición que le había dirigido con fecha 23 y 24 de agosto (A/AC.109/PET.377) y en la que hablaba de la situación económica y social de las islas. Añadió que esa situación empeoraba de día en día y escapaba cada día más al control del pueblo de las Bahamas, por lo cual había acudido a pedir ayuda y apoyo.

363. Hizo constar que, como el ingreso de las islas procedía esencialmente de los derechos de aduana, el costo de la vida era en extremo elevado. Los productos de consumo corriente eran muy caros, mientras que los artículos de lujo como el tabaco, el alcohol y los perfumes eran baratos. Esto, unido a la falta de servicios sociales adecuados, hacía que la situación fuese alarmante. Uno de los principales motivos de inquietud era el acuerdo entre el Gobierno de las Bahamas y ciertos intereses extranjeros, como las casas de juego. A pesar de las negativas del Reino Unido, el peticio-

nario declaró que podía citar casos concretos en que los conflictos de intereses eran flagrantes. El *Miami Herald* había publicado una serie de artículos en ese sentido entre el 12 y el 15 de diciembre de 1965, al igual que el *London Sunday Telegraph* (9 de enero de 1966). Señaló que en febrero había acusado al Gobierno ante la Asamblea Legislativa de haber "vendido" al pueblo de las Bahamas a bandas de pistoleros y a jugadores profesionales. Había atacado particularmente al Ministro de Finanzas y Turismo, a quien acusó de haber recibido dinero en varias ocasiones como pago por los servicios prestados. También había dirigido al Gobierno una serie de preguntas en relación con las casas de juego y las respuestas obtenidas eran un reconocimiento de que el Gobierno estaba implicado en operaciones inmorales.

364. Refiriéndose a una intervención del representante del Reino Unido en el Subcomité II (A/AC.109/SC.4/SR.51), el orador señaló que, por una parte, dicho representante estaba mal informado y, por otra, no se daba cuenta de la gravedad de la situación en las islas. En efecto, había dicho que para poner fin a los abusos, si estos últimos llegaban a ser realmente excesivos, bastaría con celebrar elecciones puesto que el pueblo tenía derecho a elegir a sus propios dirigentes mediante el sufragio universal. Ahora bien, el principio del gobierno de la mayoría no existía en las Bahamas y el Reino Unido no lo había exigido todavía; por consiguiente, las elecciones no modificarían en nada la situación.

365. Las recientes dificultades económicas que habían provocado una fuerte alza del costo de la vida, sobre todo en el curso de los últimos meses, ponían de relieve los defectos y la inestabilidad de una economía fundada únicamente en el turismo y, por tanto, la necesidad de crear otras industrias para restablecer el equilibrio. En la situación actual, el ingreso medio de una familia era de unas 9 libras 50 chelines por semana, cantidad que distaba de ser suficiente, ya que se había calculado con motivo de un estudio hecho por el United Kingdom Ministry of Overseas Department que el ingreso mínimo necesario era de 20 libras por semana y por familia. No se había hecho ningún esfuerzo para establecer otras industrias aparte del turismo. Más del 90% de los alimentos consumidos en las islas eran importados, mientras que sociedades agrícolas extranjeras exportaban grandes cantidades de productos alimenticios, lo que demostraba que sería posible desarrollar una producción para el consumo local. La pesca podría igualmente ser una fuente apreciable de ingresos. Si bien deseaba que se mantuviesen los progresos efectuados y que se acelerase el proceso de desarrollo en las islas, precisó que no se trataba de actuar con precipitación y lanzarse a la expansión económica sin el asesoramiento competente. Por eso esperaba que el Comité hiciera las recomendaciones siguientes: a) prestación de asistencia técnica inmediata a las islas Bahamas para el desarrollo de la agricultura y de la pesca, con la ayuda de todos los organismos especializados; b) prestación de asistencia financiera por el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; c) realización de estudios de preinversión bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); d) como resultado de esos estudios y en el supuesto de que los informes señalasen la existencia de un auténtico poten-

cial económico, concesión de créditos para llevar a la práctica las recomendaciones del informe de la Organización.

366. Por último, pidió de nuevo al Comité que se dirigiese a las islas para efectuar allí una investigación. Terminó dando las gracias al Comité por haberle permitido prestar testimonio ante él y se declaró dispuesto a responder a todas las preguntas que se le hicieren.

367. Contestando a un pedido de algunos detalles sobre la reciente evolución constitucional de las Bahamas, a fin de aclarar su observación sobre la falta de gobierno de la mayoría en el territorio, el peticionario declaró que las dos únicas cuestiones respecto a la constitución eran las presentadas por su partido, en forma de proyectos de ley en la Asamblea, uno con objeto de enmendar la *House of Assembly Election Act*, y otro con objeto de reafirmar la condición de "belonger", muy parecida a la de ciudadano. El primer proyecto tenía gran importancia desde el punto de vista constitucional, puesto que se proponía reformar el régimen de elección de miembros de la Asamblea mediante la supresión de la cédula de elector, primero, y la simplificación del régimen legislativo, después. Además, este último proyecto se proponía prolongar la duración de la apertura de mesas receptoras de votos en zonas de gran densidad de población y, por fin, establecer que la corrupción era delito, pues la ley actual se limitaba a decir que era necesario probar, primero, que el obsequio o el dinero ofrecidos en una elección lo habían sido con intención de corromper al elector. En realidad, el proyecto de ley presentado por la oposición tenía por objeto restablecer la ley inicial, que el Gobierno actual había modificado por razones evidentes. Por lo que hacía a la cédula de elector, no parecía necesaria, puesto que no la tenían países mucho más importantes, y no existía, en particular, en el Reino Unido. Además, como no llevaba fotografía del elector, salvo en New Providence, se había comprobado que había indigentes que la vendían y se privaban de la posibilidad de votar. Pero si dicha cédula se mantenía, la oposición pediría que se modificase la ley, para que no tuviera aquélla más objeto que el de identificación y resultase imposible lo que ocurría en la actualidad, o sea, impedir que alguien votara con el pretexto de que no la presentaba. Por otro lado, era muy complicado inscribirse en los registros electorales, dificultad que tenía por objeto desanimar a los electores. Informó al Comité de que el proyecto de ley había sido desechado y no se habían tomado en consideración ninguna de las enmiendas.

368. Cuando se le preguntó si había en el territorio un movimiento en favor de la independencia contestó afirmativamente. Dijo que la semana anterior un miembro de la Asamblea, representante del Partido Laborista, había pedido que un comité estudiara la cuestión de la independencia. Desde luego, la propuesta había sido rechazada y el Comité no se había constituido. El Progressive Liberal Party opinaba, respecto a la independencia, que ésta, hoy en día, sería comparable a la independencia de Rhodesia del Sur en el sentido de que el poder estaría en manos de una minoría oligárquica privilegiada. Los descendientes de los colonos ingleses iniciales constituían un 15% de la población, pero en la práctica tenían la dirección política y económica de las islas, aun bajo la constitución puesta en vigor en 1964. La independen-

cia significaría poner el poder en manos de esa minoría. Su partido deseaba la independencia a condición de que se democratizara el sistema electoral. Una de las principales razones ofrecidas por el Gobierno para no permitir que la propuesta se remitiera a un comité se refería a los gastos que significaría el mantenimiento de misiones en el extranjero. En aquella ocasión el partido del peticionario había hecho causa común con el autor de la propuesta y había deplorado la miopía del Gobierno, ya que la independencia era un asunto que entrañaba la obtención de la soberanía nacional, y no el mantenimiento de misiones.

369. Declaró, contestando a la pregunta de si en las islas había partidos políticos dedicados activamente a fomentar la independencia de las Bahamas y si había también partidos que preconizaran la federación de las Bahamas con otras islas de la región, que no había actualmente, que él supiera, ningún partido político en las Bahamas que sostuviese la federación con otros territorios de las Antillas. En cuanto a la primera pregunta, dijo que, salvo la tentativa de la semana anterior, de los representantes laboristas, ningún partido había tratado, hasta la fecha, de proponer la independencia que, sin embargo, se anhelaba. Como aún no se había adoptado el régimen de gobierno de la mayoría, no era posible implantar ya la independencia en las Bahamas sin preparativos previos, pues ello equivaldría a la dominación de la mayoría por la minoría y, con toda probabilidad, ocasionaría una franca rebelión y un levantamiento cruento; sin embargo, las Bahamas no querían neocolonialismo sino vivir como un país libre, y si la Potencia Administradora comenzaba a tomar medidas a fin de prepararla para la independencia, la población de las islas lo vería con gran satisfacción.

370. Contestó a una pregunta acerca de los "gansers" y los jugadores profesionales a quienes se había referido en su declaración, que le interesaría saber quiénes estaban detrás de ellos. Sabía que algunos eran americanos y entendía que en dos Estados de los Estados Unidos y en el Reino Unido se efectuaba una investigación acerca del dinero que pasaba a través de las Bahamas al Reino Unido para financiar los casinos de allí.

371. Cuando se le preguntó qué función desempeñaban los sindicatos en las Bahamas, manifestó que las leyes actuales no permitían que los trabajadores se organizaran en sindicatos de su elección. Los trabajadores de diferentes industrias no podían unirse para formar un solo sindicato; el resultado era que para una fuerza de trabajo de unas 40.000 personas, ya había registrados unos dieciséis sindicatos. La ley prohibía que los trabajadores de una industria prestasen apoyo a trabajadores envueltos en un conflicto con otra industria. Gracias a esa política de "dividir para reinar", el movimiento sindicalista de las Bahamas había sido suprimido en la práctica. Los problemas a que hacían frente los dirigentes sindicalistas habían aumentado a causa de las dificultades de comunicación en un grupo de islas separadas por grandes extensiones marítimas. Los dirigentes sindicalistas hacían cuanto podían por desenvolverse dentro de ese régimen, pero además trataban de lograr su modificación.

372. Aclarando su alusión a la venta de cédulas de elector, explicó que alguien que quisiera ser elegido podía por algún medio obtener la cédula de un votante antes del día de las elecciones, de manera que éste no

pudiese votar a pesar de ser un elector debidamente inscrito. En cuanto a la proporción de personas con derecho a votar que habían ejercido realmente ese derecho en las últimas elecciones, manifestó que, según podía recordar, el número de votantes había representado más del 82% en las islas exteriores y apenas más del 70% en New Providence. En algunas circunscripciones de New Providence la proporción de personas que hubieran podido votar pero no lo habían hecho llegó hasta el 35%.

373. El Sr. Fawkes, miembro de la Asamblea de las Islas Bahamas y Presidente de la Federación del Trabajo de las Bahamas, dijo que el objeto de su comparecencia ante el Comité Especial era pedir a las Naciones Unidas que estimularan y ayudaran al pueblo de las Islas Bahamas en sus esfuerzos para prepararse a la independencia, puesto que dicho pueblo tenía la convicción de que el colonialismo impedía la cooperación entre su país y la comunidad internacional, y frenaba su adelanto social, económico y cultural.

374. Señaló que había presentado, el 5 de septiembre de 1966, una moción pidiendo que se nombrase un comité especial que estudiase la conveniencia de invitar al Gobierno del Reino Unido a convocar una conferencia constitucional con el fin de conceder la independencia a las Islas Bahamas. Antes que el Presidente de la Asamblea Legislativa hubiera llegado al tema del programa en el que se pedía el nombramiento de comités especiales, el Primer Ministro había leído una declaración en la que había dicho que, como resultado de la Conferencia Constitucional de 1963, las Islas Bahamas tenían ya una constitución que concedía virtualmente al pueblo el pleno control de sus asuntos internos y que el país no estaba en disposición de soportar las cargas financieras que supondría hacerse cargo de la seguridad, la defensa y los asuntos exteriores del país, en el caso de la independencia completa. Había añadido que el mantener embajadas y comisiones de elevado rango en el extranjero y fuerzas de defensa exigiría el gasto de unos fondos que sería preferible invertir en fomentar el desarrollo de las Bahamas en bien de todos sus habitantes. Por esas razones, había concluido, el Gobierno no podía apoyar la propuesta de que se celebrase una conferencia constitucional en aquel momento. Cuando se votó posteriormente, la moción de nombramiento de un comité especial, había sido derrotada por 13 votos contra 7. El United Bahamian Party se había opuesto a la moción pero ninguno de sus miembros participó en el debate.

375. La declaración del Primer Ministro no respondía a la realidad, puesto que el Gobierno de las Bahamas, el cual, según sus palabras, no podía sufragar los gastos que acarrearía el mantenimiento de embajadas y comisiones de alto rango en el extranjero, en la actualidad administraba agencias de turismo en diversas partes del mundo que resultaban muy caras y que, cabía advertir, apenas empleaban personal de las Bahamas. Menos del 1% del personal de las agencias de turismo era natural de las Bahamas, siendo el resto británicos, alemanes, norteamericanos o de otras nacionalidades. Esas personas eran contratadas por el Ministerio de Turismo, mediante anuncios en periódicos extranjeros que no recibían los naturales de las Bahamas.

376. Según el Reino Unido, la población de las Bahamas no era africana, y sin embargo el gentilicio "bahameño" no era un término jurídico incluido en la

constitución; no podía decirse, tampoco, que los naturales fuesen británicos. Añadió que los naturales de las Bahamas habían estudiado historia y cultura inglesas, pero no se les había enseñado nada acerca de su pasado. Dada su situación jurídica colonial, la economía de las Islas dependía de la del hemisferio occidental y sus naturales tenían que pagar un recargo, en forma de elevados derechos aduaneros, cuando comerciaban con países que se hallaban fuera del Commonwealth. Asimismo, el valor del dólar de las Bahamas dependía del de la libra británica.

377. Se había afirmado que las Islas Bahamas poseían una constitución democrática basada en el sufragio universal, pero el hecho era que, al no percibir los miembros de la Asamblea Legislativa ningún sueldo, sólo los que poseían abundantes bienes podían presentarse a las elecciones. Por ello, la Asamblea estaba compuesta principalmente de comerciantes y personas que ejercían profesiones liberales, y era muy limitada la representación de la clase trabajadora. En los últimos doscientos años sólo dos o tres veces habían estado representadas las islas menores por una persona residente en ellas, situación que resultaba agravada por el hecho de no existir gobierno local en dichas islas. En el plano más elevado del Gobierno, las funciones administrativas no eran desempeñadas por el personal de los Ministerios, como sería de esperar, sino por secretarios permanentes británicos. Si no se le daba una mejor educación y una participación mayor en el gobierno, el pueblo de las Islas no estaría preparado para asumir las responsabilidades de la independencia. Por lo tanto, el orador encarecía a las Naciones Unidas que adoptaran medidas inmediatas para lograr que el Reino Unido estableciera un calendario para la independencia de las Islas Bahamas. Entre tanto, debería nombrarse una comisión de expertos de las Naciones Unidas para que hiciera un estudio de la situación política, económica y social a fin de que se pudieran ir adoptando medidas que preparasen al pueblo de las Islas Bahamas para ejercer la soberanía sobre su propio territorio.

378. Cuando se le preguntó qué condiciones, a su juicio, debería crear el Reino Unido para que los habitantes de las Islas pudieran expresar libremente su opinión sobre la situación jurídica futura, contestó que era necesario hacer modificaciones radicales en las leyes electorales. De los treinta y tres miembros de la Asamblea, únicamente uno residía en la circunscripción que representaba. Todos los demás distritos estaban representados por comerciantes de la capital, cuyos problemas eran muy distintos de los de las personas a las que decían servir, y que habían ganado las elecciones gracias a su riqueza y a la compra de votos. El peticionario hizo, por lo tanto, las siguientes sugerencias: en primer lugar, debería modernizarse la ley electoral a fin de evitar la corrupción; en segundo lugar, los miembros de la Asamblea deberían recibir un sueldo y se deberían establecer criterios para distinguir si la Asamblea trataba asuntos públicos o los asuntos privados de una compañía a la que perteneciera alguno de los Ministros; en tercer lugar, debería exigirse un período de residencia mayor antes que el candidato pudiera presentarse a las elecciones.

379. En relación con la situación de la enseñanza en las Bahamas, explicó que la formación profesional de los naturales del país, iniciada después de la huelga general de 1958, únicamente los preparaba para desem-

peñar puestos de categoría inferior y no podía compararse con la enseñanza que se ofrecía a los habitantes de las demás islas de las Indias Occidentales. Por ejemplo, no se daba ninguna formación que pudiera preparar a los naturales de las Bahamas para ocupar el cargo de secretario permanente. Los sindicatos no eran lo bastante fuertes para gestionar una mejor educación de los grupos trabajadores, porque la actual ley de sindicatos no permitía la creación de lo que pudiera llamarse un sindicato general, sino sólo de pequeños sindicatos por oficios. Por consiguiente, en las Bahamas existían al menos veintinueve sindicatos que, en su mayoría, ni siquiera disponían de fondos para sostener una oficina.

380. A una pregunta sobre la proporción de la fuerza de trabajo en relación con la población del Territorio, y sobre el número de representantes que debería tener dicha fuerza en la Asamblea Legislativa, respondió que la fuerza de trabajo fluctuaba entre 30 y 70% de la población. Sin embargo, él era el único representante sindical en la Asamblea. Otros candidatos sindicales deseaban presentarse a las próximas elecciones, pero, dadas las dificultades financieras con que tropezaban, podía decirse que la representación parlamentaria era un lujo que no estaba al alcance de los trabajadores.

381. Ampliando la información sobre el debate acerca de su moción respecto a un comité parlamentario, dijo que ni un solo miembro del United Bahamian Party había participado en ese debate. En realidad, el Primer Ministro y algunos otros miembros de dicho partido habían salido de la sala cuando se presentó la moción, y habían vuelto al finalizar el debate para participar en la votación. Los partidarios de la moción habían tenido la impresión de que la cuestión se había decidido en alguna otra parte, antes que se presentase el asunto ante la Asamblea. En realidad, ese es el procedimiento tradicional de las Islas Bahamas: los asuntos políticos y financieros más importantes se decidían en otros lugares y los miembros del United Bahamian Party raramente participaban en los debates, ni siquiera en los relativos a mociones presentadas por uno de sus miembros.

382. Refiriéndose de nuevo a las tarjetas electorales, añadió que se pagaba una suma a los electores por sus tarjetas, a fin de que no pudieran votar en el momento de las elecciones y reducir así considerablemente el número de votantes.

383. El representante del Reino Unido dijo que quería hacer algunas observaciones sobre asuntos tratados por los peticionarios que, a su juicio, tenían importancia especial, para examinar después las cuestiones de detalle. En primer lugar, recordó al Comité Especial cuál era la situación constitucional de las Islas Bahamas. Las Islas tenían autonomía y un órgano legislativo y un gobierno nombrados por elección popular; las próximas elecciones habían de celebrarse mediante sufragio universal de los adultos. La actual constitución había sido aceptada en la Conferencia Constitucional de 1963 por todos los partidos representados en el órgano legislativo formado por miembros elegidos. Era cierto que para las últimas elecciones, celebradas con anterioridad a la Conferencia de 1963, se había seguido un sistema diferente, pero no podía afirmarse que cualquier supuesto defecto achacado al sistema anterior hubiese de reproducirse automáticamente en las futuras elecciones. Las circunscripciones

electorales establecidas en virtud del Acuerdo de 1963 se habían fijado por una comisión totalmente independiente, encargada de crear dichos distritos, cuyas decisiones, una vez aprobadas por la Asamblea, no podían ser anuladas por decisión del Gobernador ni por el Gobierno del Reino Unido. Las decisiones sobre procedimiento electoral, como la inscripción en las listas, habían sido adoptadas de acuerdo con la ley local, aprobada por la Asamblea elegida en las Islas.

384. Le parecía al Sr. Pindling que el sistema electoral de las Islas Bahamas no aseguraba el gobierno de la mayoría. El orador piensa que tal vez quería decir que la proporción de los votos emitidos podría no reflejarse exactamente en la proporción de los puestos. Ello, desde luego, era inevitable en todo sistema basado en las circunscripciones electorales, como el que existía en el Reino Unido y en muchos otros países democráticos. Aun en el caso de que fuera posible conseguir que cada circunscripción tuviera un número exactamente igual de votantes, un partido que tuviera una gran mayoría en unas cuantas circunscripciones podría obtener una gran mayoría de los votos emitidos y, a pesar de ello, no obtener una gran mayoría de los representantes. Debería recordarse asimismo que, en virtud del sistema electoral establecido en la Conferencia de 1963, se había exigido de la Comisión establecida para fijar las circunscripciones electorales que, en principio, procurase que fueran lo más iguales posible. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido no podía aceptar que en las Islas Bahamas no regía el principio de la mayoría. Si el partido del Sr. Pindling lograba convencer al cuerpo electoral del mérito de sus propuestas, y vencer así en las próximas elecciones, podría, sin duda, ponerlas en práctica; pero, para ello, debería dirigir sus esfuerzos al cuerpo electoral de las Islas Bahamas y no al Comité.

385. En segundo lugar, el orador estaba seguro de que el Comité Especial no quería decir ni hacer nada que pudiera suponer que se pronunciaba en asuntos de interés político puramente interno. Pero el Comité acababa de oír la larga declaración de un dirigente de la oposición sobre ciertos puntos de desacuerdo que existían entre su partido y el que ocupaba el poder. También había oído las graves acusaciones que se habían hecho, con escasas pruebas o sin prueba alguna, contra Ministros electivos que no habían tenido oportunidad de defenderse ni de presentar su versión del caso. Había oído asimismo reclamaciones sobre casos en los que los partidos minoritarios habían sido derrotados en la votación por el partido mayoritario elegido. Finalmente, había oído a algunos de sus propios miembros declarar su simpatía y su apoyo por el partido de la oposición, en contra del Gobierno legalmente elegido. La delegación del Reino Unido dudaba que esas actuaciones favorecieran los propósitos del Comité.

386. Por último, el Sr. Pindling se había referido a dos observaciones hechas por el representante del Reino Unido en el Subcomité III; si el Comité leía cuidadosamente lo que el representante del Reino Unido había dicho en ese Subcomité y las observaciones del peticionario al respecto, reconocería que nada de lo dicho por el peticionario fundamentaba en modo alguno la acusación de que la información dada por el representante del Reino Unido al Subcomité podía inducir a error, y menos que aún fuese inexacta.

387. La delegación del Reino Unido trataría en el Subcomité III otros asuntos a los que se habían referido los peticionarios. Sin embargo, querría examinar algunos de los puntos planteados por el señor Fawkes sobre cuestiones distintas del problema principal de la independencia. Por lo que respectaba a la proporción entre los funcionarios civiles naturales de las Bahamas y los que no lo eran, debería indicar que, como se decía en el propio informe del Comité Especial correspondiente a 1964, a fines de 1962 la administración contaba con 142 funcionarios procedentes del exterior, frente a un total de 2.418 funcionarios de extracción local, en todos los departamentos. Quizás fuese verdad, como decía el Sr. Fawkes, que era necesaria una mayor educación para preparar al pueblo a la independencia, pero lo cierto era que la enseñanza era obligatoria en las Islas Bahamas entre los cinco y los catorce años de edad. Por último, la pregunta del representante de Siria sobre la representación que deberían tener los trabajadores en la Cámara no tenía, en opinión del orador, ningún sentido real en el contexto del problema de la evolución constitucional, que era el principal objeto de interés del Comité.

388. El Presidente dijo que, para hacer justicia a los peticionarios, creía su deber indicar que no habían afirmado que no hubiese bahameños en la administración, sino que todos los cargos importantes estaban ocupados por funcionarios de ultramar.

389. El representante de la República Unida de Tanzania indicó que, en efecto, el representante del Reino Unido había dicho que creía que el Comité Especial no querría imponer ninguna solución al pueblo de las Islas Bahamas, el cual debería tener libertad para decidir cualquier asunto que le incumbiese exclusivamente. La delegación de Tanzania compartía ese parecer, y precisamente por tal motivo se oponía a la servidumbre colonial impuesta por el Gobierno del Reino Unido al pueblo de las Bahamas, el cual debería y tenía que ejercer la soberanía nacional.

390. El representante de Siria aseguró al representante del Reino Unido que la cuestión de quién representaba a los trabajadores no había sido planteada por la delegación siria, ni — que él supiese — por ningún otro miembro del Comité Especial. En vista de la declaración de los peticionarios, según los cuales la fuerza de trabajo no tenía la debida representación en el Parlamento, el Comité había tenido que calcular el número y la proporción de dicha fuerza de trabajo, para averiguar si el Parlamento era o no representativo. El propio solicitante había afirmado que el gobierno mayoritario en las Bahamas era una farsa, por lo que el Comité se había visto obligado a aclarar la situación. Habría sido más justo que el representante del Reino Unido hubiese hecho varias preguntas a los peticionarios antes de retirarse éstos, para que los miembros hubieran podido tener en cuenta sus respuestas.

391. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el representante del Reino Unido había dado a entender que no incumbía al Comité determinar quién era trabajador y quién no lo era o no estaba representado en la Asamblea Legislativa. Pero era deber del Comité estudiar atentamente todos los cambios constitucionales producidos en el Territorio. El orador estimaba que el asunto planteado por el representante de Siria era perfectamente legítimo, porque la respuesta a esa pregunta

permitiría al Comité decidir hasta qué punto era realmente democrática la constitución y hasta qué punto reflejaba los intereses de toda la población del Territorio.

392. Las declaraciones del representante del Reino Unido y los datos aportados por los peticionarios habían demostrado que los órganos legislativos del Territorio no representaban a todas las clases de la población. Había varios requisitos que impedían a las masas ser miembros de los órganos legislativos. La respuesta del peticionario a la pregunta del representante de Siria demostraba que sólo las clases ricas — terratenientes y comerciantes — estaban representadas en el Parlamento, y que la Potencia Administradora favorecía los intereses de esa minoría, que representaba sólo el 15% de la población. Como ese grupo estaba formado por los descendientes de los primitivos colonos ingleses del Territorio, todo el poder se concentraba de hecho en manos de la minoría blanca. Por ello no era casualidad que el peticionario hubiese trazado una analogía entre la situación de su país y la de Rhodesia del Sur.

393. A juicio del orador, todos esos problemas eran de suma importancia y el Comité debería examinarlos pues mostraban hasta qué punto la constitución de un determinado Territorio colonial reflejaba los intereses del pueblo de ese Territorio.

394. El representante de Bulgaria declaró que el representante del Reino Unido había creído oportuno dar instrucciones a los miembros del Comité Especial. Había reprendido a varios miembros que habían hecho preguntas a los peticionarios y que, según él, habían mostrado simpatía por ellos. A juicio del representante del Reino Unido, dichos miembros no debieran haberlo hecho, porque los peticionarios representaban a la oposición.

395. La delegación de Bulgaria simpatizaba mucho con los peticionarios y siempre había visto con agrado la causa de los auténticos representantes de los pueblos coloniales y de quienes aspiraban a la independencia, pertenecieran al partido del Gobierno o a la oposición.

396. Además, el representante del Reino Unido se oponía claramente a que los peticionarios fuesen interrogados sobre cuestiones económicas, sociales y culturales. Esas preguntas eran necesarias porque eran consecuencia de la información que el Reino Unido debía facilitar en virtud del Artículo 73 de la Carta. Como esa información representaba sólo el punto de vista de la Potencia Administradora, era de suma importancia que los miembros hicieran preguntas a los peticionarios.

397. El representante del Reino Unido, respondiendo al representante de Bulgaria, declaró que no recordaba nada que permitiera directa o indirectamente suponer que no deseaba que los miembros del Comité Especial hicieran preguntas a los peticionarios sobre cuestiones sociales, culturales y económicas. Aseguró al representante de Bulgaria que no había hecho objeciones en tal sentido.

398. El representante de Malí recordó que al comenzar las tareas del Comité Especial este año el representante del Reino Unido había asegurado a los miembros su completa cooperación. El Comité había aprobado una resolución en que se recomendaba que

las Potencias administradoras dieran facilidades a los subcomités que visitaran los Territorios no autónomos para que pudiesen averiguar las verdaderas circunstancias en que vivían los pueblos de esos Territorios. Era bien conocida la actitud de las Potencias administradoras sobre ese punto.

399. En aquel momento se presentaban ante el Comité Especial unos peticionarios que eran los únicos capaces de ilustrar al Comité y de permitirle adoptar decisiones y aprobar recomendaciones sin tener que basarse exclusivamente en las declaraciones de la Potencia Administradora. Esta, sin embargo, había refutado todo cuanto habían dicho los peticionarios, y había llegado a negar a los miembros del Comité el derecho a hacer determinadas preguntas. Por ello el orador se preguntaba qué entendía la delegación del Reino Unido por cooperación con el Comité Especial.

Declaraciones de los miembros

400. El representante del Irán, hablando en su calidad de Relator del Subcomité III, presentó el informe del Subcomité acerca de sus trabajos durante 1966 (véase el anexo). Señaló que el Comité Especial había aprobado, en su 413a. sesión, las recomendaciones del Subcomité acerca de la cuestión de las misiones visitadoras. Las conclusiones y recomendaciones del Subcomité relativas a los territorios examinados se recogían en los párrafos 74, 177, 211 y 212 del informe. Era de advertir que el Subcomité no había podido tratar de Honduras Británica ni había podido dedicar a algunos territorios la atención que merecían; por tanto el Subcomité esperaba que se consideraran con detenimiento en una de las primeras fases de los trabajos del Comité Especial del año siguiente.

401. El representante del Reino Unido dijo que su delegación reservaba su posición en cuanto a las conclusiones y recomendaciones de todas las secciones del informe. Si se aprobaba el informe, pidió que las reservas de su delegación constaran en el informe del Comité Especial.

402. Había dos cuestiones en que el informe se había quedado atrás de los acontecimientos. La prometida Conferencia Constitucional sobre las Islas Vírgenes Británicas que se mencionaba en el apartado 9) del párrafo 177 se había celebrado en octubre y se habían discutido detalladamente las recomendaciones del Comisionado Constitucional. Su delegación facilitaría información detallada a ese respecto en el próximo período de sesiones del Comité Especial, pero estimaba que en los apartados 9) y 10) del párrafo 177 no se tenían en cuenta los acontecimientos recientes y, en particular, que ya se habían tomado las "urgentes medidas" que se pedían en el apartado 9).

403. En lo que se refiere a Barbada, el representante de Bulgaria, según constaba en el párrafo 96 del informe, había expresado la opinión de que probablemente el Gobierno de Barbada no organizaría elecciones hasta después de la independencia; esa opinión se reflejaba quizás en las conclusiones que aparecían en el inciso a) del párrafo 177. Pero, en realidad, se habían celebrado elecciones el 3 de noviembre conforme a la decisión del Primer Ministro de Barbada a quien incumbía decidir la fecha de las elecciones, y por lo tanto el pueblo había tenido ocasión de expresar sus

deseos antes que el Territorio se independizase, acontecimiento que tendría lugar el 30 de noviembre de 1966.

404. El Comité podría tomar nota asimismo de que el 8 de noviembre había dado comienzo una Conferencia Constitucional en las Bermudas.

405. El representante de Bulgaria dijo que durante las deliberaciones del Subcomité no había podido obtener del representante del Reino Unido información alguna sobre si se iban a celebrar elecciones antes de la independencia o después y por tanto había llegado a la conclusión de que no era seguro que se celebraran antes, cuestión de la mayor importancia si se pretendía que la población disfrutase de una libre determinación auténtica.

406. Lamentó que el Subcomité no hubiera tenido ocasión de prestar la debida atención a algunos territorios y esperaba que más adelante los trabajos del Comité Especial y de los subcomités se pudieran organizar de modo que todos los subcomités tuvieran tiempo de terminar sus trabajos.

407. Su delegación no se sentía en todos los casos plenamente satisfecha con las conclusiones y recomendaciones adoptadas, pero, en general, se había sumado al consenso en el Subcomité III. La delegación de Bulgaria había formulado reservas respecto del apartado 7) del párrafo 74, relativo a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y del apartado 13) del párrafo 177, relativo a las Islas Vírgenes Británicas. En efecto, su delegación no podía apoyar plenamente la declaración de que era indispensable la presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación; estimaba en efecto que esa presencia podía comprometer la posición de las Naciones Unidas, puesto que en el momento en que el Subcomité examinaba la cuestión no existían en los territorios estudiados condiciones favorables para la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. A juicio de su delegación, la presencia de las Naciones Unidas debería consistir en una misión visitadora; ulteriormente, podría considerarse si convenía alguna otra forma de presencia.

408. Su delegación se oponía a la redacción actual del apartado 6) del párrafo 74 y del apartado 12) del párrafo 177, especialmente a la frase "sin excluir las [posibilidades] contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General". Para el Comité Especial, el documento básico era la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que en el párrafo 2, de la parte dispositiva, sostenía el derecho de libre determinación y la libertad de los pueblos a determinar su condición política. No parecía procedente que un comité establecido con objeto de asegurar la aplicación de la resolución 1514 (XV) sugiriera a un pueblo otras "posibilidades" expuestas en una resolución diferente. El objetivo de la resolución 1541 (XV) era diferente del de la resolución 1514 (XV); en efecto, su finalidad era facilitar orientación para determinar si era aplicable o no la disposición de la Carta relativa a la transmisión de información, y todo intento de interpretarla como complementaria de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era artificial. No existía base alguna para extraer ciertos principios de la resolución 1541 (XV) y presentarlos como medios posibles para aplicar la resolución 1514 (XV) en ninguna de las resoluciones de la Asamblea General que se referían a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de

la independencia a los países y pueblos coloniales, ni siquiera en la resolución 2063 (XX) que se ocupaba específicamente de la cuestión de los territorios pequeños. Tampoco se hacía referencia alguna a la resolución 1541 (XV) en los informes del Subcomité I y II ni en ninguna de las secciones del presente informe, a excepción de los dos pasajes a que se había referido. Por todas esas razones, no podía apoyar el apartado 6) del párrafo 74 ni el apartado 12) del párrafo 177 en su forma actual.

409. El representante de Malí estaba de acuerdo con el representante de Bulgaria en que era difícil aceptar la redacción actual del apartado 6) del párrafo 74 y del apartado 12) del párrafo 177, especialmente la referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, que se ligaba a la resolución 1514 (XV). En efecto, la resolución 1514 (XV) era la "carta" del Comité, que debía basar sus trabajos en esa resolución. Lamento que las Potencias administradoras no se hubieran mostrado dispuestas a consentir que fueran misiones visitadoras a los distintos territorios. En efecto, los territorios pequeños creaban problemas difíciles, pero una misión visitadora ayudaría a las Potencias administradoras a cumplir sus obligaciones hacia esos pueblos y por tanto el representante de Malí deseaba hacer un llamamiento a las Potencias del caso pidiéndoles que dieran muestras de mayor cooperación al respecto. Algunas Potencias administradoras sí mostraban deseos de cooperar. España había dado ya facilidades para la visita de una misión a la Guinea Ecuatorial y actualmente se deliberaba sobre el envío de una misión a Adén. Por tanto, su delegación apoyaba particularmente las declaraciones contenidas en el apartado 8) del párrafo 74.

410. Los pequeños territorios tenían problemas difíciles de solucionar. El Comité debía tener presente que el objetivo de su labor era la correcta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y especialmente de su párrafo 2, referente a la libre determinación, en toda solución que propusiera. La delegación de Malí hacía constar sus reservas acerca de las Islas Cook. En el informe pertinente se decía que la población había escogido libremente mantener sus vínculos con la Potencia Administradora, y la referencia que se hacía a la resolución 1541 (XV) debía interpretarse con ese espíritu. Las pequeñas islas no eran viables como entidades independientes, y podía serles ventajoso asociarse entre sí o con la Potencia Administradora, o integrarse a ésta, pero lo fundamental era que la decisión estuviera en manos del pueblo. El Comité Especial no podía autorizar a las Potencias administradoras para que decidieran por sí el porvenir de los territorios.

411. El representante de la India dijo que podía aprobar el informe del Subcomité en su integridad, incluidas las conclusiones y recomendaciones. Agradeció a la delegación del Reino Unido la información adicional que había facilitado y tomó nota complacido de que se habían celebrado elecciones en Barbada antes de la independencia. Esperaba que se siguiera esa práctica en otros territorios. En cuanto al punto suscitado por el representante de Bulgaria, la delegación de la India apoyaba plenamente las disposiciones de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General; de hecho, la delegación de la India había intervenido activamente en la elaboración de esa resolución. Al mismo tiempo, estimaba que la referencia a la resolución 1541 (XV) no era totalmente pertinente o necesaria en las conclu-

siones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a las Islas Vírgenes Británicas. La tarea del Comité Especial era recomendar todas las medidas necesarias para acelerar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. La resolución 1541 (XV) se ocupaba de si existía o no la obligación de transmitir la información que se pedía en el Artículo 73 de la Carta, y en los casos de que se trataba las Potencias administradoras interesadas habían aceptado esa obligación. La resolución 1541 (XV) podría ser también pertinente si hubiese que determinar si un territorio era o no un territorio no autónomo y si la resolución 1514 (XV) le era aplicable. El representante de la India agregó que en el caso de que un pueblo decidiera libremente integrarse con la Potencia metropolitana, su delegación aceptaría esa decisión sin reserva alguna. La interferencia parecía particularmente superflua porque el resto del párrafo aludía ya indirectamente a la resolución 1541 (XV).

412. El representante de Dinamarca dijo que la oposición a que se hiciera referencia a la resolución 1541 (XV) parecía basada o en el argumento de que no había relación alguna entre la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y los principios expuestos en la resolución 1541 (XV), o en el de que era innecesaria una referencia explícita puesto que en el texto ya se señalaban a la atención de la población las diversas posibilidades que se le ofrecían. Ninguno de ambos argumentos le parecía convincente. Tanto la resolución 1514 (XV) como la 1541 (XV) se ocupaban de territorios no autónomos y por tanto debían considerarse como relacionadas entre sí. El representante de la India parecía admitir la existencia de tal relación al decir que la resolución 1541 (XV) podría utilizarse para decidir si la resolución 1514 (XV) era aplicable a un determinado territorio. Su delegación consideraba importante que los pueblos de todos los territorios no autónomos tuvieran conciencia de su derecho a la libre determinación y de las opciones que tenían en ejercicio de ese derecho. Naturalmente la resolución 1514 (XV) era de importancia primordial para el Comité Especial, pero la resolución 1541 (XV) era también importante, sobre todo cuando se trataba de territorios como los remitidos al Subcomité III. Muchas delegaciones, incluidas las delegaciones de países de Africa y Asia, habían puesto anteriormente de relieve los problemas especiales con que se enfrentaban los territorios pequeños y las diversas posibilidades de arreglo que tenían a su disposición, siempre en el entendimiento de que esos arreglos correspondieran a los deseos de la población. Por tanto, apoyaba la decisión del Subcomité de incluir una referencia a la resolución 1541 (XV) y no veía motivo alguno para suprimirla. Si no se había hecho tal referencia en otros casos en que podría haber estado justificada, eso no era motivo para omitirla en el caso actual.

413. El representante de Polonia dijo que se oponía a la inclusión de una referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en las recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a las Islas Vírgenes Británicas. La cuestión era importante, ya que las Potencias coloniales trataban con frecuencia de invocar el principio VI de la resolución 1541 (XV) como definición de los medios por los que la población de algunos territorios dependientes podía acceder a la independencia. Ese principio, sacado de su contexto, podría servir así como cortina

de humo para la anexión de territorios. Si no era ésa la intención, era difícil entender por qué ciertas Potencias coloniales deseaban hacer referencias a la resolución 1541 (XV) cuando ésta no era pertinente.

414. Con arreglo al informe del Subcomité, algunos de sus miembros habían considerado, al parecer, que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) eran en algún modo complementarias. No había prueba alguna en la resolución 1541 (XV) de que la Asamblea General hubiera tenido la menor intención de considerarla como complementaria de la resolución 1514 (XV). Cabía recordar que la resolución 1541 (XV) se había aprobado porque los factores para determinar si un territorio era territorio no autónomo, según se los enumeraba en la resolución 742 (VIII), habían resultado inadecuados y porque ciertas Potencias coloniales se habían negado a presentar información con arreglo a la Carta. En consecuencia, la resolución tenía por objeto hacer frente a esa situación concreta y no sustituir ni completar la resolución 1514 (XV), aprobada el día anterior como documento básico para guiar el proceso de descolonización.

415. Los principios establecidos en la resolución 1541 (XV) habían sido utilizados por la Asamblea para evaluar la situación de los territorios bajo administración portuguesa, pero no se había considerado que sugirieran medios para la liberación de tales territorios. Esos principios se habían utilizado también al considerar la cuestión de Rhodesia del Sur; sin embargo, una vez esclarecida la situación, no se había vuelto a hacer referencia a la resolución 1541 (XV). Ese era un indicio de cómo interpretaba la Asamblea General el alcance de la resolución 1541 (XV).

416. Todas las resoluciones de la Asamblea General directamente pertinentes para los trabajos del Comité Especial, como las resoluciones 1810 (XVII), 1956 (XVIII) y 2105 (XX), se referían a los principios establecidos en la resolución 1514 (XV) y no a la resolución 1541 (XV). Ciertamente insistían en el derecho de los pueblos de los territorios no autónomos a decidir libremente su futuro y era cierto que ese derecho no se debía restringir y que los pueblos debían conocer las distintas posibilidades que se abrían ante ellos, pero sólo después de que se hubiera alcanzado la emancipación política, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1514 (XV), podrían aplicarse las disposiciones de la resolución 1541 (XV) a fin de determinar cuándo podía cesar la transmisión de información. En el caso de los territorios en examen, era evidente que aún no se había llegado a la fase en que se podía afirmar que el pueblo había ejercido su derecho a la libre determinación y podía por tanto terminar la supervisión internacional.

417. Por las razones que había expuesto, su delegación no podría apoyar el informe si no se suprimía en el apartado 6) del párrafo 74 y en el apartado 12) del párrafo 177 la frase "sin excluir las [posibilidades] contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General".

418. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que el examen detenido del informe del Subcomité III, así como de todos los documentos pertinentes, mostraba que las Potencias administradoras de los territorios coloniales del Caribe no sólo no habían cumplido las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por lo que toca a esos te-

territorios, sino que también trataban de preservar su control sobre ellos o de anexárselos. El informe indicaba claramente que la política del Reino Unido con respecto a los territorios del Caribe había llevado a la disolución de la Federación de las Indias Occidentales. El Reino Unido se empeñaba, con diversos pretextos, en lograr la asociación de algunos de los Territorios al país metropolitano. Aunque el Gobierno del Reino Unido trataba de disimular sus maquinaciones, el Gobierno de los Estados Unidos ni siquiera intentaba ocultar sus propósitos anexionistas. Era fácil ver que la situación en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos no permitía al pueblo ejercer libremente su derecho a la libre determinación. Por ejemplo, la Ley No. 2082 de la Asamblea Legislativa de las Islas Vírgenes indicaba claramente que los habitantes del Territorio no tenían otra opción que la asociación o la integración a la Potencia metropolitana. Saltaba a la vista que la política del Reino Unido y de los Estados Unidos por lo que tocaba a los territorios antillanos bajo su administración estaba en contradicción completa con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

419. En términos generales, la delegación soviética estaba de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del Subcomité relativas a los territorios del Caribe, pero no podía aceptar las partes del apartado 6) del párrafo 74 relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ni el apartado 12) del párrafo 177 referentes a las Islas Vírgenes Británicas, en los cuales se aludía a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. El mandato del Comité Especial se basaba en la resolución 1514 (XV) y en las resoluciones subsiguientes aprobadas en posteriores períodos de sesiones de la Asamblea General, es decir, las resoluciones 1654 (XVI), 1810 (XVII), 1956 (XVIII) y 2105 (XX). En ninguna de estas resoluciones se aludía en absoluto a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Esto era comprensible, pues la mencionada resolución abarcaba un asunto enteramente diferente, a saber, la obligación de transmitir información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. La tarea del Comité Especial, según lo previsto en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, era prestar a los pueblos dependientes su ayuda para que pudieran ejercer en libertad su derecho a la libre determinación y a la independencia completa. Sin embargo, las Potencias occidentales procuraban obligar al Comité Especial a que siguiera otro camino y con tal fin se empeñaban en utilizar la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Lo que a las Potencias occidentales les resultaba tan atractivo en esta resolución no eran las disposiciones relativas al derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación y a la independencia sino las que aludían a la asociación, tal como la existente entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y a la integración, que en este caso significaba integración de los territorios coloniales al propio país metropolitano, paso que equivalía a la anexión.

420. Algunos representantes se habían referido a la declaración contenida en el párrafo 310 del capítulo XXV del informe de 1964 del Comité Especial (A/5800/Rev.1), relativo a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, de que en un mundo caracterizado por el movimiento integracionista, quizá fuera deseable que los pueblos de los territorios pequeños tuvieran en cuenta las formas mencionadas en la resolución 1541 (XV) en su consecución de los objetivos de la resolu-

ción 1514 (XV). Alusiones de esa índole no tenían validez, ya que la Asamblea General no autorizaba al Comité Especial a emplear la resolución 1541 (XV) para interpretar la resolución 1514 (XV). Cabía recordar asimismo que algunas delegaciones habían votado en contra de ese texto y que casi todos los miembros del Comité Especial se habían abstenido. El texto se había aprobado simplemente porque el Comité no había tenido tiempo suficiente para examinar el significado cabal de esa declaración. A juicio de su delegación, había sido un error y el Comité no debía repetirlo.

421. Aunque en el apartado 7) del párrafo 74 no se mencionaba explícitamente la resolución 1541 (XV), la referencia a esta resolución estaba implícita en su redacción. También podía hacerse la misma observación respecto de los apartados 4) y 13) del párrafo 177 y del apartado 6) del párrafo 211. La delegación soviética no podía apoyar los párrafos en los cuales se aludía a la resolución 1541 (XV) ya fuera explícita o implícitamente porque ello podría interpretarse como un apoyo a la política anexionista de las Potencias administradoras de que se trataba. Además, tenía algunas salvedades sobre la recomendación contenida en el apartado 7) del párrafo 74 en cuanto a la presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos del ejercicio del derecho de libre determinación en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pues consideraba que en la situación reinante en el Territorio esa presencia no serviría ningún propósito útil y bien podría menoscabar el prestigio de las Naciones Unidas. La Organización no haría más que suscribir la Ley No. 2082 de la Asamblea Legislativa de las Islas Vírgenes en virtud de la cual el único camino abierto a los habitantes del Territorio era la asociación o integración con los Estados Unidos. Su delegación estimaba que antes de tomar cualquier decisión sobre el estatuto futuro de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y de las Islas Vírgenes Británicas, el Comité Especial debería enviar una misión visitadora a esos territorios para averiguar la opinión de los habitantes.

422. El representante del Uruguay dijo que su país no era una Potencia colonialista sino un pequeño país democrático que creía firmemente en una comunidad internacional fundada en el respeto a la ley.

423. La resolución 1541 (XV) de la Asamblea General complementaba incuestionablemente la resolución 1514 (XV). La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General establecía principios generales y la resolución 1541 (XV) había sido aprobada para tener en cuenta el caso especial de los territorios pequeños. El deber esencial del Comité Especial era facilitar y salvaguardar la consecución de la independencia de todos los territorios coloniales. En el caso de los territorios pequeños, el aspecto económico revestía gran importancia.

424. En cuanto al Territorio de Barbada, se había tratado de hacer responsable a la Potencia Administradora del fracaso de las negociaciones sobre la federación. Aunque la delegación uruguaya estimaba que era la asociación, en una u otra forma, la que ofrecía las mejores perspectivas para la viabilidad económica de los Territorios del Caribe, los habitantes de Barbada habían ejercido su derecho a la libre determinación y habían optado por una independencia separada. Como ya había manifestado el representante del Uruguay en el Subcomité III, su delegación no se proponía indicar a los pueblos interesados el camino que debían seguir;

sus observaciones atañían exclusivamente a la esfera de los principios (véase el anexo, párr. 68). Corresponía a los habitantes de los territorios decidir su futuro estatuto; las Naciones Unidas debían indicar las posibilidades que se les ofrecían pero no tratar de imponerles ninguna forma especial de gobierno. El representante de la URSS estimaba que la resolución 1541 (XV) se refería únicamente a la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Sin embargo, esa resolución fijaba los criterios en virtud de los cuales podía considerarse si un territorio no autónomo había alcanzado o no la plenitud del gobierno propio.

425. Agregó que no defendía a ninguna Potencia colonial; actuaba en defensa de los principios jurídicos y trataba meramente de asegurar que la descolonización se lograra de conformidad con los instrumentos que la propia comunidad internacional había concebido. A su juicio, la resolución 1541 (XV), aprobada con el propósito concreto de complementar la resolución 1514 (XV), no era un obstáculo que se opusiera a la libre determinación de los pueblos y no había razón para no mencionarla. Por lo tanto, su delegación apoyaba la referencia a la resolución 1541 (XV) en los párrafos de que se trataba.

426. El representante de Siria dijo que la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General trataba concretamente de la aplicabilidad de la obligación de una Potencia Administradora de transmitir información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. Si en el apartado 6) del párrafo 74 y en el 12) del párrafo 177 del informe del Subcomité, se hubiera hecho alusión al problema de la información, la referencia a la resolución 1541 (XV) hubiera sido entonces pertinente. En las circunstancias del caso, la referencia no agregaba nada al texto y debía suprimirse. Si la intención de los autores había sido destacar el derecho de los pueblos a la libre determinación, este derecho era en efecto el meollo de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y la resolución 1541 (XV) no interpretaba la resolución 1514 (XV). El hecho de que las dos resoluciones se hubieran aprobado en un lapso tan breve indicaba que se ocupaban de dos asuntos distintos; de otra manera se hubieran incluido sus disposiciones en una sola resolución. Los representantes de Bulgaria, Mali y la India sólo habían dicho que la referencia a la resolución 1541 (XV) no venía al caso en el contexto; dichos representantes no habían dicho que no debiera mencionársela en absoluto. Si se consideraba que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) eran interdependientes, habría que mencionar a la segunda cada vez que se aludiera a la primera, sin considerar si venía o no al caso. Las dificultades con que tropezaban los territorios pequeños podían allanarse en virtud de la resolución 1514 (XV); resultaba difícil ver cómo una resolución relativa a la presentación de información podía contribuir a resolver esas dificultades.

427. El representante de Yugoslavia dijo que su delegación estaba de acuerdo en general con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité. Con referencia al apartado 6) del párrafo 74 y al 12) del párrafo 177, y teniendo en cuenta que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era la carta del Comité Especial y en vista de las declaraciones formuladas por los representantes anteriores, estimaba que bastaría, en el contexto, aludir úni-

camente a la resolución 1514 (XV). En cuanto al apartado 7) del párrafo 74 y al 13) del párrafo 177, el representante yugoslavo consideraba que las Naciones Unidas debían desempeñar un papel concreto en la descolonización y asociarse activamente a cualquier procedimiento por el cual los habitantes de los territorios expresaran sus deseos sobre la independencia, a fin de averiguar sus verdaderos deseos en cuanto a su futuro estatuto. Por este motivo, era importante enviar misiones visitadoras a los territorios para que informaran sobre su situación. Si esto no era posible, la única información disponible sería la suministrada por la Potencia Administradora.

428. El representante de Italia dijo que, como su delegación era miembro del Subcomité III, sus puntos de vista ya figuraban en el informe del mismo. En cuanto a la reserva del representante búlgaro relativa al apartado 7) del párrafo 74 y al 13) del párrafo 177, estimaba que podría dar la lamentable impresión de que dicho representante descaba limitar el papel de las Naciones Unidas e impedir la presencia de la Organización en la supervisión del ejercicio del derecho a la libre determinación; el representante de Italia abrigaba la esperanza de que no hubiera sido ésa la intención del representante búlgaro.

429. Por lo que hace a la sugestión formulada por el representante de Bulgaria y apoyada por otros oradores de suprimir la referencia a la resolución 1541 (XV) contenida en el apartado 6) del párrafo 74 y el 12) del párrafo 177, el representante de Italia estimaba que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era plenamente aplicable a los territorios de que se trataba, pero que había circunstancias especiales como consecuencia de la reducida extensión y población de los territorios. La delegación italiana había destacado a menudo la necesidad de estudiar a fondo la cuestión de los territorios pequeños y de formular criterios que gobernarán su descolonización y estatuto futuro. La Asamblea General en el párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución 2105 (XX) había pedido al Comité Especial que prestara suma atención a los territorios pequeños. Sin embargo, no se había emprendido todavía ningún estudio acerca de las circunstancias especiales existentes en los territorios pequeños ni se había formulado ningún criterio en la materia. El citado representante abrigaba la esperanza de que el Comité Especial abordara esta cuestión en su próximo período de sesiones y de que la Asamblea General incluyera una disposición concreta en este sentido en su resolución relativa al informe del Comité Especial. Italia, como casi todos los demás miembros del Subcomité III, había estimado necesario indicar que las características especiales de los territorios que se examinaban hacían aplicables las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV). Induciría a error declarar que los territorios debían alcanzar la independencia únicamente sobre la base de la resolución 1514 (XV), ya que el debate efectuado en el Subcomité III había versado sobre la necesidad de fusionarlos en asociaciones más grandes para que obtuvieran mayor robustez política y económica y permanecieran libres de injerencia del exterior.

430. En cuanto a la declaración del representante de la URSS, la resolución 1541 (XV) no mencionaba la asociación o la integración a la Potencia Administradora sino a Estados independientes en general. Había varios Estados independientes en la región del Caribe con los cuales los territorios que se examinaban po-

drían asociarse o integrarse. Como no se habían formulado todavía criterios que rigieran el estatuto futuro de los territorios pequeños, y como el Subcomité no había estimado oportuno formular recomendaciones concretas acerca de la asociación entre territorios determinados ni acerca de una federación, estimaba que la mejor forma de cumplir su mandato sería incluir alusiones generales a la resolución 1541 (XV). Convenía mantener estas referencias. Su supresión debilitaría el alcance de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe.

431. El representante de los Estados Unidos de América, contestando a las afirmaciones del representante de la URSS sobre la supuesta supresión del derecho a la libre determinación en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, dijo que durante el año pasado se habían hecho progresos importantes hacia la libre determinación. Los habitantes ya tenían un órgano legislativo elegido sobre la base del sufragio universal y se habían logrado adelantos en el sentido de proporcionarles un jefe ejecutivo elegido por voluntad popular, así como en el de eliminar el veto presidencial. También se habían adoptado medidas para perfeccionar el carácter representativo de la Asamblea Legislativa. Difícilmente podía aducirse que la Convención había visto su actuación estorbada a causa de su mandato relativo a la investigación sobre la relación entre las Islas y los Estados Unidos, puesto que el informe definitivo de la Convención se refería concretamente a esa cuestión. En 1964, se había celebrado la Convención Constitucional sobre la base más amplia posible, con participación de los diversos partidos políticos de las Islas Vírgenes. Entre los que habían asistido a la Convención había veintidós delegados, elegidos en noviembre de 1964 por todos los isleños, así como once miembros de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, resultaba difícil argüir que los puntos de vista de la Convención no eran los de la mayoría del pueblo. La recomendación de la Convención sobre una nueva distribución de los miembros de la Asamblea Legislativa ya había sido aceptada por el Congreso de los Estados Unidos y transformada en ley. Las recomendaciones relativas a la elección de un gobernador y a la abolición del veto presidencial ya habían sido examinadas por las dos Cámaras del Congreso. Sólo quedaban por resolverse unas pocas dificultades secundarias, tales como la fecha en que entrarían en vigor cuando el Congreso suspendiera sus sesiones. La Administración había apoyado activamente esa medida e insistirían nuevamente en que se aprobara en el próximo período de sesiones del Congreso.

432. Se había sugerido que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General expresaba los principios generales que habían de guiar al Comité Especial y que la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General se refería a una cuestión lateral, a saber, la transmisión de información por la Potencia Administradora. Semejante interpretación no se conformaba a la realidad. Como había dicho el representante del Uruguay, se trataba de resoluciones complementarias. La resolución 1541 (XV) se aplicaba especialmente a la cuestión del derecho a la libre determinación en los territorios pequeños y establecía las diversas formas en que tales territorios podían lograr el derecho a la libre determinación. Esa había sido la cuestión presentada al Subcomité y no había ninguna razón para no incluir en el informe la alusión a la resolución 1541 (XV). Negarse a admitir su existencia parecía poco realista e in-

necesariamente restrictivo. Había amplios precedentes para conservar las referencias, pues en el informe del Comité Especial a la Asamblea General en su decimonoventa período de sesiones sobre los Territorios examinados por el Subcomité III (A/5800/Rev.1, cap. XXV) se hacía referencia a la resolución 1541 (XV) en las conclusiones generales.

433. El representante de la República Unida de Tanzania dijo que deseaba señalar a la atención de las Potencias administradoras la segunda frase que figuraba en el inciso 7) del párrafo 74 y el 13) del párrafo 177. Esperaba que durante los procedimientos para el ejercicio del derecho a la libre determinación se invitara a las Naciones Unidas a que comprobaran la legitimidad del proceso. Compartía el pesar expresado en el inciso 8) del párrafo 74 y el 14) del párrafo 177. La resolución 1541 (XV) de la Asamblea General se refería a la transmisión de información y no tenía absolutamente nada que ver con el proceso de la descolonización. La resolución 1542 (XV) de la Asamblea General, que se refería a la resolución 1541 (XV), no dejaba ninguna duda al respecto. El Comité Especial no trataba de decidir si las Islas Vírgenes eran autónomas; las consideraba como Territorios dependientes; por lo tanto, la alusión a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General no venía al caso. El único principio rector debía ser la resolución 1514 (XV) y su delegación se opondría a que se incluyera la referencia a esta resolución si el asunto era sometido a votación. Sólo después de examinar detenidamente la cuestión de los territorios pequeños sería posible decidir si en el proceso de descolonización podrían tenerse en cuenta las otras formas de autonomía mencionadas en el principio VI del anexo a la resolución 1541 (XV).

434. El representante de Sierra Leona dijo que su delegación estimaba algo prematura la inclusión en el informe de una referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Según se había puesto de relieve, esa resolución había sido aprobada poco después de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y los objetivos de ambas resoluciones eran muy claros. La resolución 1514 (XV) era una declaración categórica de los principios que debían guiar al Comité Especial al examinar los problemas de descolonización, mientras que en la resolución 1541 (XV) se enunciaban los principios que debían guiar a la Asamblea General para determinar si existía o no la obligación de transmitir la información que se pedía en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. Lo esencial era que se ofreciera a los pueblos de los territorios la posibilidad de decidir con plena libertad su condición futura. El Subcomité había decidido no hacer referencia a la resolución 1541 (XV) porque había basado sus trabajos en la resolución 1514 (XV) y toda referencia a la resolución 1541 (XV) sería prematura. El representante de Sierra Leona estimaba que no se podía considerar aplicable esa última resolución hasta que un territorio alcanzara el grado de independencia definido en el principio VI del anexo a la misma resolución, es decir, antes que pasara a ser un Estado independiente y soberano, estableciera una libre asociación con un Estado independiente, o se integrara a un Estado independiente.

435. Aclaró que su delegación no sugería que todo territorio tenía que pasar a ser un Estado independiente y soberano, sino que el pueblo del territorio de que se trataba debía estar en libertad de decidir, sin coacción ni restricciones, su condición futura.

436. Por consiguiente, la delegación de Sierra Leona estaba de acuerdo con los representantes que habían opinado en la sesión precedente que debían suprimirse en el informe las referencias a la resolución 1541 (XV).

437. El representante de Venezuela dijo que su delegación mantenía su actitud de que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era el instrumento fundamental de descolonización y debía aplicarse en todas las partes del mundo donde aún persistían los vestigios del colonialismo.

438. Venezuela era tradicionalmente defensora del principio de libre determinación y apoyaba el logro de la independencia por los países y pueblos bajo dominio colonial. Añadió que, como la independencia sin viabilidad económica colocaría a muchos territorios pequeños en una situación de dependencia respecto de la antigua Potencia Administradora o algún otro país poderoso, su delegación estimaba que la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General era un complemento necesario de la resolución 1514 (XV), pues enunciaba medios, distintos de los previstos en la resolución 1514 (XV), por los que un territorio podía alcanzar la plenitud del gobierno propio, y además, tenía por objeto garantizar que la decisión tomada por un pueblo en pleno ejercicio de su derecho de libre determinación y por medio de un referéndum popular, fuera la que mejor respondiera a sus intereses.

439. Si bien varias delegaciones habían atribuido a la Potencia Administradora la responsabilidad porque no se había logrado constituir una federación en el Caribe, las Naciones Unidas no podían decidir la forma de independencia que hubiera de adoptar determinado territorio. La Organización sólo podía garantizar que los pueblos coloniales interesados llegaran a ejercer su derecho de autodeterminación con libertad absoluta.

440. En cuanto a la observación del representante de Siria en la sesión precedente, de que la referencia a la resolución 1541 (XV) nada añadía al texto, opinaba que también cabía preguntar qué inconveniente entrañaría, puesto que, aun sin referencia explícita a la resolución, la idea de dicha resolución seguiría implícita en el párrafo.

441. Añadió que su delegación apoyaba el texto de los incisos 6) y 7) del párrafo 74 y del inciso 12) del párrafo 177 del informe.

442. El representante de Túnez estimó que eran muy válidas las objeciones a la inclusión de una referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en el informe. Según se indicara, el Comité Especial se guiaba en sus trabajos por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en la que se declaraba que se había de permitir que los pueblos dependientes ejercieran libremente su derecho a la plena independencia. La delegación de Túnez consideraba esencial que el pueblo estuviera en condiciones de hacer su elección en plena libertad mediante una consulta popular, y que los resultados de ese referéndum tuvieran carácter obligatorio para la comunidad internacional. Puso de relieve que la resolución 1514 (XV) no limitaba las formas políticas que el pueblo podía elegir, y que era misión del Comité garantizar que aquél eligiera libremente y no se viera sujeto a presión alguna. Por esa razón, en el inciso 6) del párrafo 74 del informe del Subcomité se invitaba a la Potencia Administradora a que procurara que la población del territorio se percatara plenamente de las diversas posibili-

dades que se le ofrecían. En consecuencia, la delegación de Túnez no veía necesidad alguna de incluir una referencia a la resolución 1541 (XV), particularmente en vista de que existía divergencia en el Comité Especial sobre la cuestión. Hizo un llamamiento a los partidarios de mantener la referencia a la resolución 1541 (XV) para que no insistieran en su posición.

443. El representante de Australia señaló que su delegación, que no era miembro del Subcomité III, deseaba tan sólo reservar su posición acerca de ciertos aspectos de las conclusiones y recomendaciones del Subcomité, en particular respecto de la función que las Naciones Unidas podrían adecuadamente desempeñar en los territorios en estudio, habida cuenta de la situación concreta de tales territorios.

444. Añadió que su delegación coincidía con la actitud general expuesta por los representantes de Dinamarca y de Uruguay en cuanto a la inclusión de la referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en el informe. A juicio de la delegación de Australia tales referencias no entrañaban ningún peligro para los objetivos generales que todos los miembros perseguían en relación con esas islas, sino que, por el contrario, ofrecían estas salvaguardias en las circunstancias peculiares que se daban allí. Esas referencias no menoscababan en absoluto la validez de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, sino que la complementaban como había señalado el representante de Venezuela. No cabía duda de que los problemas de esas islas eran distintos de los de otros territorios en que se había ocupado el Comité y, por tanto, las soluciones debían responder a su carácter diferente.

445. El representante del Irán dijo que en el debate del Subcomité III habían sido objeto de controversia dos puntos: el primero concernía a la referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General y el segundo a la idea de una presencia de las Naciones Unidas en los territorios durante el ejercicio de su derecho de libre determinación.

446. En cuanto al primer punto, la mayoría de los miembros estimaba que si bien la base de los trabajos del Comité Especial era la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, convenía hacer referencia a la resolución 1541 (XV) con objeto de que el pueblo de los territorios tuviese alguna idea de las diversas formas de condición política que se les ofrecían. En consecuencia, la mayoría había decidido adoptar el texto que el Comité Especial había utilizado en el párrafo 310 de las conclusiones generales relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en su informe de 1964 (A/5800/Rev.1, cap. XXV). Sin embargo, como una minoría de los miembros seguía manteniendo sus reservas respecto de la referencia a la resolución 1541 (XV), y como el Subcomité tenía empeño en llegar a un consenso, los miembros habían convenido en adoptar la fórmula intermedia presentada al Comité Especial en el inciso 6) del párrafo 74 y en el inciso 12) del párrafo 177. Como se podía advertir, no se vinculaba la resolución 1541 (XV) a la resolución 1514 (XV) sino que se decía simplemente — respecto a las posibilidades — “sin excluir las contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General”. Dicho de otro modo, se refería a las distintas formas de condición política. Siempre que hubiera acuerdo en que se debía informar al pueblo de las distintas formas de condición política que se le ofrecían, y que se le debía dar la posibilidad de expresarse libremente, no

tenía consecuencia alguna el que el Comité decidiera excluir o incluir una referencia a la resolución 1541 (XV).

447. Por lo que hacía a la presencia de las Naciones Unidas durante el ejercicio de libre determinación, la mayoría de los miembros del Subcomité la consideraba esencial. Una minoría opinaba que en aquel momento no sería procedente hacer una recomendación de esa índole. A juicio de la mayoría, la mejor manera de acelerar el proceso de descolonización era garantizar que el pueblo del territorio interesado pudiera ejercer su derecho de libre determinación con plena libertad y sin restricciones de ningún género. Mas, sólo con una presencia de las Naciones Unidas se podía determinar si la decisión del pueblo correspondía o no a sus deseos libremente expresados.

448. El representante de Uruguay no podía coincidir con la opinión expuesta en la sesión precedente por el representante de la República Unida de Tanzania, en el sentido de que la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General no tenía nada que ver con el proceso de descolonización. Mantuvo su posición de que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General eran complementarias, y señaló que, en la sesión en curso, los representantes de Venezuela y de Irán habían adoptado igual posición. Si bien el representante de Tanzania había aludido a la resolución 1542 (XV), a su juicio ésta apoyaba su propia tesis ya que concernía a la cuestión de la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta; no hacía sino aplicar la resolución 1541 (XV) al caso particular de determinados Territorios bajo administración portuguesa y exponer la conclusión de que Portugal tenía la obligación de transmitir información al respecto. La resolución 1542 (XV) no contenía ningún elemento que entrañara derogación o anulación alguna, explícita o implícita, de la resolución 1542 (XV). Del principio VI del anexo a la resolución 1541 (XV) — y a la luz del párrafo 2 de la parte dispositiva, los principios del anexo tenían la misma fuerza que la propia resolución — se desprendía claramente que un territorio no autónomo podía alcanzar la plenitud del Gobierno propio al pasar a ser un Estado independiente y soberano, al establecer una libre asociación con un Estado independiente o al integrarse con un Estado independiente. A falta de alguna otra decisión de la Asamblea que derogara o anulara la resolución 1541 (XV), ese principio seguía en vigor.

449. En cuanto al llamamiento dirigido a los miembros por el representante de Túnez, el representante del Uruguay lamentaba tener que mantener su actitud, que se basaba en una cuestión de principio. La delegación del Uruguay no tenía ningún interés político que defender en la cuestión, pero estimaba que la causa de la descolonización debía defenderse con arreglo a la ley. Sería peligroso introducir factores políticos en la interpretación de los principios jurídicos. Como el Subcomité había decidido, por el voto de la mayoría, que la referencia a la resolución 1541 (XV) era procedente en los dos casos que ocupaban al Comité, el citado representante no pensaba que esa posición fuera perjudicial a la causa de la descolonización. Estimó que el texto se debía mantener en su forma actual.

D. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL

450. En la 478a. sesión, el Comité Especial examinó las conclusiones y recomendaciones propuestas por el

Subcomité III acerca de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, según figuraban en el párrafo 74 de su informe (véase anexo).

451. El representante de Malí propuso que en el inciso 6) del párrafo 74 se suprimiese la frase "sin excluir las contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General".

452. La enmienda de Malí encaminada a suprimir dicha frase, fue aprobada por 11 votos contra 6 y 3 abstenciones.

453. A continuación el Comité Especial aprobó las conclusiones y recomendaciones del Subcomité III, con las enmiendas introducidas, sin objeciones, y en la inteligencia de que se harían constar las reservas expresadas por algunos miembros (véanse párrs. 401 a 450 *supra* y 454 a 457 *infra*).

454. El representante de la India, al explicar su voto, dijo que se había abstenido porque, aunque su delegación apoyaba la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, en el presente caso era innecesario hacer referencia a la misma. Sin embargo, no podía votar a favor de la enmienda por temor a que tal acción fuese interpretada como un voto contra la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, lo que sería contrario a la posición de su delegación según había sido expresada en una sesión anterior del Comité. Su delegación deseaba que su opinión constara en actas.

455. El representante de Madagascar hubiera deseado que se mantuviese la frase eliminada, y de haberse buscado un consenso habría sostenido esa opinión, porque las opciones que ofrecía la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en nada afectaban lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) acerca de la libre determinación.

456. El representante del Irán expresó que los pequeños territorios eran más vulnerables que otros a las presiones exteriores y que debía asegurárseles la oportunidad de ejercer la libre determinación. Por eso el Subcomité había recomendado la presencia de las Naciones Unidas, que por su parte debían respetar la voluntad libremente expresada por el pueblo. Este debía conocer las posibilidades que le brindaba la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. La delegación del Irán apoyaba esta resolución, pero se había abstenido en la votación por considerar que no era imprescindible mencionarla en el caso de que se trataba.

457. El representante de los Estados Unidos de América dijo que deseaba que constase en actas la reserva general de su delegación acerca del capítulo que se examinaba y de la decisión que acababa de adoptar el Comité Especial.

458. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité Especial en relación con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se consignan en el inciso a) del párrafo 469 *infra*.

459. En la misma sesión, el Comité Especial examinó las conclusiones y recomendaciones propuestas por el Subcomité III acerca de las Islas Vírgenes Británicas, Barbada, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente, según figuraban en el párrafo 177 de su informe.

460. El Presidente sugirió que, de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité Especial respecto del inciso 6) del párrafo 74, daba por sentado que el Co-

mité deseaba votar sobre la supresión de la frase "sin excluir las contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General" en el inciso 12) del párrafo 177.

461. La enmienda tendiente a suprimir dicha frase fue aprobada por 12 votos contra 6 y 3 abstenciones.

462. A continuación, el Comité Especial aprobó las conclusiones y recomendaciones propuestas por el Subcomité III, con las enmiendas introducidas, sin objeciones y en la inteligencia de que se harían constar las reservas expresadas por algunos miembros (véanse párrs. 401 a 450 y 454 a 457 *supra* y 463 *infra*).

463. El representante de Madagascar reiteró formalmente que, de haberse buscado un consenso, se habría opuesto a esta supresión. Sin embargo, ante el resultado de la votación, consideraba que la mención de la resolución 1514 (XV) bastaba para salvaguardar los derechos del pueblo.

464. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité Especial acerca de estos Territorios figuran en el inciso b) del párrafo 469 *infra*.

465. En la misma sesión, el Comité Especial examinó las conclusiones y recomendaciones propuestas por el Subcomité III acerca de las Bermudas, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán, según figuraban en el párrafo 211 de su informe.

466. El Subcomité aprobó las conclusiones y recomendaciones propuestas por el Subcomité III, sin objeciones y en la inteligencia de que se harían constar las reservas expresadas por algunos miembros (véanse párrs. 401 a 450 *supra*).

467. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité Especial acerca de las Bermudas, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán figuran en el inciso c) del párrafo 469 *infra*.

468. En la misma sesión, el Comité Especial aprobó la declaración propuesta por el Subcomité III, acerca de las Islas Malvinas (Falkland Islands), según figuraba en el párrafo 212 de su informe.

469. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas con respecto a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Barbada, Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán, así como la declaración relativa a las Islas Malvinas (Falkland Islands), que fueron aprobadas por el Comité Especial en su 478a. sesión, celebrada el 16 de noviembre, decían lo siguiente:

a) *Islas Vírgenes de los Estados Unidos*

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones que sobre el Territorio adoptó en 1964 y que fueron ratificadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales tiene plena aplicación al Territorio.

3) Toma nota de la información proporcionada por la Potencia Administradora en relación con la Convención Constitucional que se reunió de diciembre de 1964 a febrero de 1965 y que propuso una nueva Ley Orgánica para el Territorio, que prevé un mayor grado de autonomía.

4) Toma nota también de que la Potencia Administradora hasta el momento sólo se ha pronunciado definitivamente sobre una de las propuestas formuladas por la convención y que todavía no se ha aprobado como ley la propuesta sobre un gobernador electivo.

5) Deplora que, pese a cierto grado de progreso en materia política, la Potencia Administradora no haya dado cumplimiento todavía a la Declaración en relación con el Territorio y le insta a que lo haga sin demora.

6) Reafirma el derecho del pueblo a ejercer su derecho de libre determinación con completa libertad y reitera su anterior recomendación en la que invitaba a la Potencia Administradora a asegurar que la población del Territorio pueda expresar, con plena libertad y sin restricciones de ningún género, sus deseos en orden a la futura situación política del Territorio. Invita asimismo a la Potencia Administradora a que procure que la población del Territorio se percate plenamente de las diversas posibilidades que se le ofrecen, en la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

7) Reitera su convencimiento de que las Naciones Unidas deben cerciorarse de que el ejercicio del derecho de libre determinación se practica con plena libertad y con total conocimiento de las posibles opciones. Considera, por consiguiente, que es indispensable la presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación.

8) El Comité Especial deplora que la Potencia Administradora no haya aceptado que una misión visitadora del Comité Especial se traslade al Territorio y afirma que una visita al Territorio es, a la vez, útil y necesaria. En consecuencia, invita a la Potencia Administradora a prestar su cooperación para que las Naciones Unidas puedan enviar una misión visitadora al Territorio a fin de obtener información directa acerca del Territorio y cerciorarse de la opinión de la población y de la medida en que ésta tiene conocimiento de las opciones que se le ofrecen en relación con su futura situación política.

b) *Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Barbada*

De orden general

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones relativas a estos Territorios que aprobó en 1964, y que la Asamblea General hizo suyas en su vigésimo período de sesiones.

2) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos Territorios. Al mismo tiempo, reconoce que el pequeño tamaño y la escasa población de estos Territorios y el carácter de su economía presentan problemas peculiares que requieren especial atención.

3) El Comité Especial reafirma que incumbe a los pueblos de los Territorios, y solamente a ellos, expresar libremente su parecer sobre el estatuto político que desean adoptar a fin de realizar los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

4) El Comité Especial reafirma el derecho de los pueblos de esos Territorios a ejercer su derecho a la libre determinación con libertad absoluta y con pleno conocimiento de las diversas formas de estatuto político que se ofrecen a su elección. Asimismo, expresa su creencia de que las Naciones Unidas, particularmente en el caso de los Territorios pequeños, deberían adoptar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de dichos Territorios pudieran expresar libremente su parecer sobre su estatuto futuro, con pleno conocimiento de las posibilidades que se les brindan.

5) El Comité Especial reitera sus recomendaciones anteriores sobre la necesidad de enviar misiones visitadoras a esos Territorios y, con tal fin, insta a la Potencia Administradora a que haga posible el envío de misiones visitadoras a esos Territorios por el Comité Especial.

6) El Comité Especial recuerda su convicción, expresada en 1964, según la cual debería ser posible que esos Territorios se unieran con otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. También recuerda que, en aquel momento, se estaban llevando a cabo negociaciones entre casi todos esos Territorios con el propósito de establecer una federación. El Comité Especial deplora que esas negociaciones no hayan tenido éxito y que, en consecuencia, cada Territorio se haya visto obligado a buscar una solución por separado. Expresa la esperanza de que la Potencia Administradora hará cuanto esté a su alcance para facilitar el tipo de solución que desee el pueblo.

Islas Vírgenes Británicas

7) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones que sobre el Territorio aprobó en 1964 y que fueron ratificadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

8) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales tiene plena aplicación al Territorio.

9) Toma nota de que un Comisionado Constitucional visitó el Territorio en 1965 y que, a base de su informe, se celebrará una Conferencia Constitucional en octubre de 1966. Toma nota también con preocupación de las observaciones del Comisionado Constitucional acerca del descontento que reina en el Territorio, una de cuyas principales razones consiste en que el Gobierno se mantiene apartado del pueblo. El Comité Especial confía en que la Potencia Administradora adoptará urgentes medidas para remediar la situación.

10) El Comité Especial lamenta que a pesar de ciertos progresos en materia constitucional, la Potencia Administradora no haya dado cumplimiento todavía a la Declaración en el Territorio y la insta a que lo haga sin demora.

11) Reafirma el derecho del pueblo a ejercer su derecho de libre determinación con completa libertad.

12) El Comité Especial reitera el criterio que expresó en 1964 en el sentido de que debe ser posible que el Territorio se una a otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. Deplora que desde 1947 no se hayan tomado medidas efectivas para consultar al pueblo sobre una posible federación con otros Territorios. Por consiguiente, invita a la Potencia Administradora a que adopte las medidas del caso para que la población del Territorio se

percate plenamente de las diversas posibilidades que se le ofrecen en la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El Comité Especial invita asimismo a la Potencia Administradora a que se asegure de que el pueblo del Territorio pueda expresar, con completa libertad y sin restricción alguna, sus deseos en cuanto a la situación política futura del Territorio.

13) Reitera su convencimiento de que las Naciones Unidas deben asegurarse de que el ejercicio del derecho de libre determinación en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General se practica con plena libertad y con total conocimiento de las posibles opciones. Considera, por lo tanto, que en el procedimiento relativo al ejercicio del derecho de libre determinación será esencial una presencia de las Naciones Unidas.

14) El Comité Especial lamenta que la Potencia Administradora no haya aceptado el envío de una misión visitadora del Comité Especial al Territorio, y afirma que una visita a él es tanto útil como necesaria. Por lo tanto, pide la cooperación de la Potencia Administradora para que las Naciones Unidas puedan enviar una misión visitadora al Territorio con objeto de recabar información de primera mano al respecto y averiguar el sentir del pueblo.

Barbada

15) El Comité Especial recuerda que, la última vez que examinó la situación del Territorio, Barbada había iniciado activamente negociaciones para formar una federación o asociación con territorios vecinos.

16) Señala que, después que uno de los Territorios que participaba en las negociaciones hubo determinado retirarse de ellas, el Poder Legislativo de Barbada decidió por separado solicitar la independencia del Territorio.

17) El Comité Especial acoge con agrado la fijación del 30 de noviembre de 1966 como fecha en la que Barbada obtendrá la independencia.

18) El Comité Especial observa que aún es posible que Barbada forme parte de una federación, en caso de que el pueblo de Barbada exprese ese deseo por conducto de sus representantes electos.

Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente

19) El Comité Especial, después de oír la intervención de la Potencia Administradora así como la del peticionario de Granada, estimó que no era posible conceder a la cuestión de estos Territorios la consideración detallada que requieren. Por ello, decide posponer su consideración de esta cuestión y examinar detalladamente la situación en estos Territorios al principio de sus sesiones de 1967, sin perjuicio de las decisiones que la Asamblea General pueda tomar en su vigésimo primer período de sesiones.

c) Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán

1) El Comité Especial recuerda sus conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán adoptadas en 1964 y refrendadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

2) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos Territorios.

3) El Comité Especial lamenta que la Potencia Administradora no haya aplicado todavía la Declaración en esos Territorios e insta a que lo haga sin demora.

4) El Comité Especial considera que, en vista de que no dispone de suficiente información sobre esos Territorios y de que, en el caso del Territorio de las Bahamas, las declaraciones del representante de la Potencia Administradora y de los peticionarios respecto a las condiciones de esos Territorios son contradictorias, la Potencia Administradora debe permitir al Comité Especial que envíe lo antes posible misiones visitadoras a los Territorios.

5) El Comité Especial considera que la Potencia Administradora debe tomar inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos Territorios, sin condiciones ni reservas, de conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absoluta.

6) Asimismo, se muestra convencida de que, sobre todo en el caso de los pequeños Territorios, las Naciones Unidas deben tomar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de estos Territorios tengan la posibilidad de expresarse libremente en cuanto a su situación futura, con pleno conocimiento de las diversas opciones que se les ofrecen.

7) El Comité Especial, después de escuchar la declaración de la Potencia Administradora y las de los peticionarios de las Bahamas, no tuvo oportunidad de examinar la cuestión de estos Territorios con el detenimiento necesario. Decide, por lo tanto, aplazar el examen de esta cuestión y, sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, examinar la situación de estos Territorios con detalle lo antes posible en sus reuniones de 1967.

d) *Islas Malvinas (Falkland Islands)*

El Comité Especial recuerda las disposiciones de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, por la que la Asamblea: i) invitó a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands); ii) pidió a ambos Gobiernos que informaran al Comité Especial y a la Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones. El Comité Especial toma nota de la información proporcionada por los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido (A/AC.109/145 y Add.1, A/AC.109/146 y Add.1) en el sentido de que se celebraron reuniones sobre el problema los días 19 y 20 de julio de 1966 y de que proseguirían dichas reuniones.

ANEXO

[A/AC.109/L.329 y Corr.1 y Add.1]

Informe del Subcomité III

Relator: Sr. Mohsen Sadigh ESFANDIARY (Irán)

INDICE

	<i>Párrafos</i>
INTRODUCCIÓN	1-5
I. APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2069 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL, INCLUSO LA CUESTIÓN DE LAS MISIONES VISITADORAS	6-13
II. ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS	14-74
A. Examen por el Subcomité	14-62
B. Aprobación del informe	63-73
C. Conclusiones y recomendaciones	74
III. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, BARBADA, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTÓBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCÍA Y SAN VICENTE	75-177
A. Examen por el Subcomité	75-169
B. Aprobación del informe	170-176
C. Conclusiones y recomendaciones	177
IV. BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS E ISLAS CAIMÁN	178-211
A. Examen por el Subcomité	178-208
B. Aprobación del informe	209-210
C. Conclusiones y recomendaciones	211
V. ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)	212

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Especial, en su 400a. sesión, celebrada el 4 de abril de 1966, decidió que el Subcomité III siguiese compuesto de la misma manera que en 1965*.

2. El Subcomité III, en su 41a. sesión, celebrada el 28 de abril de 1966, eligió al Sr. Leonardo Díaz González (Venezuela) como Presidente y al Sr. Mohsen Sadigh Esfandiary (Irán) como Relator. En la 45a. sesión, celebrada el 9 de agosto de 1966, a raíz del traslado del Sr. Leonardo Díaz González, el Sr. Mohsen Sadigh Esfandiary asumió las funciones de Presidente del Subcomité.

3. En su 42a. sesión, celebrada el 5 de mayo, el Subcomité decidió que examinaría las cuestiones que le habían sido remitidas en el orden siguiente:

1) Aplicación de la resolución 2069 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea General, incluso la cuestión de las misiones visitadoras.

2) a) Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Islas Caimán;

b) Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Barbada.

3) Islas Malvinas (Falkland Islands) y Honduras Británica.

4. De conformidad con la práctica usual, los representantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los Estados Unidos de América, las Potencias administradoras, participaron en la labor del Comité cuando éste examinó los Territorios de los que esas Potencias son responsables.

5. El Subcomité celebró diecinueve sesiones en total entre el 28 de abril y el 11 de octubre de 1966. Por falta de tiempo

* Los miembros del Subcomité son: Bulgaria, la Costa de Marfil, Irán, Italia, Madagascar, Uruguay y Venezuela.

el Subcomité no pudo ocuparse del Territorio de Honduras Británica. A continuación figura el relato del examen por el Subcomité de los demás asuntos que le fueron remitidos, junto con las correspondientes conclusiones y recomendaciones del Subcomité, cuya aprobación encomienda éste al Comité Especial.

I. APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2069 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL, INCLUSO LA CUESTIÓN DE LAS MISIONES VISITADORAS

Examen del Subcomité

6. El Subcomité examinó esta cuestión en sus 42a. a 44a. sesiones, celebradas el 5, 11 y 12 de mayo.

7. En su 42a. sesión, el Subcomité autorizó a su Presidente a que se pusiera en contacto con los representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos con objeto de conocer sus puntos de vista acerca de la petición hecha por la Asamblea General en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 2069 (XX).

8. En la 43a. sesión, el Presidente informó a los miembros del Subcomité de las respuestas que había recibido de los representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos.

9. El representante del Reino Unido había dicho que la cuestión de las misiones visitadoras planteaba a su Gobierno difíciles problemas de principio y que no podía decir nada que pudiera alentar al Subcomité a esperar cambio alguno en la actitud expresada anteriormente por su Gobierno. Su delegación estaría dispuesta a transmitir al Gobierno del Reino Unido cualquier sugestión o petición específica del Subcomité en relación con una visita a un territorio determinado, pero tal acción no podría interpretarse en el sentido de que implicara compromiso alguno de que el Gobierno del Reino Unido pudiera responder a dicha petición.

10. El representante de los Estados Unidos había dicho que no estaba en condiciones de dar una respuesta en términos generales a la cuestión de las misiones visitadoras. Cualquier propuesta específica del Subcomité para visitar un territorio del que los Estados Unidos fueren responsables sería transmitida a su Gobierno, pero no podía alentar la idea de que su Gobierno cambiaría su posición.

11. El Subcomité, en su 44a. sesión, después de estudiar las respuestas, aprobó por consenso una recomendación al Comité Especial. El representante de Italia expresó reservas respecto de la utilidad de esa recomendación.

12. El texto de la recomendación que aprobó el Subcomité es el siguiente:

"El Subcomité recomienda al Comité Especial que, de conformidad con la posición adoptada por la Asamblea General durante su vigésimo período de sesiones acerca de la cuestión de las misiones visitadoras, y expuesta en el párrafo 3 de la resolución 2069 (XX) de 16 de diciembre de 1965 y en la parte pertinente del párrafo 7 de la resolución 2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965, invite a las Potencias administradoras a que, en aquellos casos en que el Comité Especial decida enviar misiones visitadoras a cualquiera de los Territorios que están siendo estudiados por el Subcomité III, hagan posible que las visitas de esas misiones se realicen y les ofrezcan su cooperación."

Los párrafos pertinentes de esas resoluciones dicen lo siguiente:

"3. *Pide [asimismo]* a las Potencias administradoras que permitan a las misiones de las Naciones Unidas visitar los Territorios y les ofrezcan toda su cooperación y asistencia (resolución 2069 (XX));

"7. *Aprueba* el programa de trabajo previsto por el Comité Especial para 1966, en especial la posibilidad de organizar una serie de reuniones en Africa y de enviar misiones visitadoras a los Territorios, sobre todo a las regiones del Atlántico, del Océano Indico y del Pacífico;" (resolución 2105 (XX)).

13. El Comité Especial, en su 413a. sesión, celebrada el 13 de mayo de 1966, aprobó esta recomendación, que le fue presentada por el Relator en un informe oral.

II. ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

A. Examen por el Subcomité

Introducción

14. El Subcomité examinó la cuestión del Territorio de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en sus sesiones 47a., 50a. a 52a. y 55a. a 57a., celebradas entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre de 1966.

15. El Subcomité tuvo ante sí los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 10 a 31).

16. De conformidad con el procedimiento acordado por el Comité Especial, el representante de los Estados Unidos de América, como Potencia Administradora, participó en los trabajos del Subcomité, por invitación del Presidente.

Declaraciones generales

17. El representante de los Estados Unidos de América dijo que los dos años que acababan de transcurrir habían sido años de expansión económica y social para las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Aun cuando el Territorio sólo tenía una población de unos 50.000 habitantes, los ingresos de la administración local habían aumentado de unos 25 millones de dólares en el año fiscal de 1964 a casi 29 millones de dólares en el de 1965, e iban todavía en aumento. Los ingresos per cápita de 2.000 dólares eran los más elevados del Caribe y los activos de los bancos habían aumentado en un 35% hasta superar los 90 millones de dólares. Las escalas de salarios habían continuado elevándose y la industria turística había incrementado su volumen en el año 1965 a la cifra de 54 millones de dólares. Estaba casi terminada la construcción de una gran fábrica de aluminio que había de funcionar formando un complejo con una refinería de petróleo; esta nueva planta contribuiría a diversificar la economía. Además, el Gobierno de las Islas Vírgenes había adquirido las instalaciones de agua y energía eléctrica de la Virgin Islands Corporation, organismo del Gobierno Federal que había sido establecido en la década de 1930-1940 para contribuir a estabilizar la economía del Territorio. Esta corporación sólo conservaba ya una pequeña parte de sus operaciones que en un tiempo habían sido tan importantes.

18. Durante el año anterior el número de alumnos de las escuelas públicas había aumentado en un 8% llegando a más de 10.000; en el curso de los cuatro años anteriores se habían construido 92 nuevos salones de clase y 26 instalaciones especiales y para el otoño de 1966 estarían listas 113 nuevas clases. Se habían establecido la formación preescolar y programas de enseñanza para adultos y de formación de aprendices, y en 1965 se había graduado la primera promoción en el College of the Virgin Islands. Había continuado la expansión de los programas de sanidad y los hospitales habían mejorado sus instalaciones. Se había inaugurado un nuevo centro asistencial para jóvenes y una guardería diurna para niños en edad preescolar y se habían empleado fondos del Gobierno Federal para establecer, *inter alia*, un programa social por barriadas para jóvenes, un programa de capacitación para trabajadores no especializados y un programa de formación preescolar (*Operation Headstart*). Entre las viviendas en construcción figuraban unidades para familias de ingresos reducidos y otras que se alquilaban a las de ingresos medios. Con ayuda de fondos procedentes de programas sostenidos por el Gobierno Federal, se construirían más de 1.000 unidades de vivienda por año para reemplazar las que no reunirían las condiciones necesarias.

19. El presupuesto del Gobierno de las Islas Vírgenes para 1966 había pasado de los 42 millones de dólares, con un aumento de más de 6 millones de dólares, la mayor parte

del cual sería invertida primordialmente en enseñanza, obras públicas, sanidad y seguridad pública. Los ingresos correspondientes a 1966, se habían compuesto de 29.500.000 dólares de procedencia local, 500.000 del programa federal *Medicare* y aportaciones paralelas del Gobierno Federal que ascendían a 11.750.000 dólares, de los cuales 5 millones se habrían de invertir en mejoras de la enseñanza.

20. En noviembre de 1964, a petición del órgano legislativo de las Islas Vírgenes se había convocado una Convención Constitucional para estudiar la Ley Orgánica Revisada de 1954, conforme a la cual se gobernaba el Territorio. Entre los que habían asistido a la convención figuraban 22 delegados elegidos en noviembre de 1964 y los once miembros del órgano legislativo. En julio de 1965 se habían transmitido al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso recomendaciones en forma de propuesta de una segunda Ley Orgánica Revisada de las Islas Vírgenes. La Convención Constitucional no había recomendado ningún cambio radical en las relaciones de las Islas Vírgenes con el Gobierno Federal, pero había sugerido enmiendas a la Ley Orgánica en el sentido de dar a la población del Territorio un mayor control sobre cuestiones locales, políticas y fiscales. Las recomendaciones más significativas eran las de que el gobernador y el vicegobernador fueran elegidos por votación popular, y fueran responsables únicamente ante el electorado y que sólo pudieran ser depuestos mediante acusación, y de que se revocara la facultad del Presidente de los Estados Unidos para vetar la legislación local. La Cámara de Representantes había aprobado proyectos legislativos para llevar a la práctica tales recomendaciones y el Senado los estaba estudiando actualmente. La Convención Constitucional había recomendado también una nueva distribución de los miembros del órgano legislativo de las Islas Vírgenes a fin de que la elección de senadores se hiciera sobre la base de igual representación, y las dos Cámaras del Congreso habían aprobado ya la legislación necesaria para poner en práctica tal recomendación. El Gobierno de los Estados Unidos estaba examinando detenidamente otras recomendaciones. Algunas de ellas exigirían enmiendas a la Constitución Federal, tal como una propuesta de suprimir la facultad del Congreso para anular leyes dictadas por el órgano legislativo de las Islas Vírgenes (facultad que de hecho nunca se había ejercido desde que había entrado en vigor la Ley Orgánica Revisada de 1954) y propuestas de designar un representante de las Islas Vírgenes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y de permitir que los naturales de las Islas Vírgenes votaran en las elecciones nacionales de los Estados Unidos. Los progresos logrados hasta entonces demostraban claramente el gran interés que tenía el Gobierno de los Estados Unidos en garantizar el disfrute de la libre determinación a la población de las Islas Vírgenes.

21. El representante de Bulgaria dijo que, en los dos años transcurridos desde que se había estudiado por última vez el Territorio en el Subcomité y el Comité Especial, la Potencia Administradora había suministrado muy poca información sobre el desarrollo político general de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El Subcomité no había escuchado a peticionarios ni había recibido información alguna sobre el Territorio, salvo la proporcionada por la Potencia Administradora. El Subcomité debía señalar a la atención del Comité Especial y de la Asamblea General esta situación anormal, y debían hacerse todos los esfuerzos posibles para obtener información adicional de otras fuentes, tales como la prensa internacional.

22. Las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General no habían sido aplicadas todavía a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La Convención Constitucional de 1964, que había propuesto algunos cambios destinados a dar a la población un mayor control de los asuntos locales, no había cambiado en ninguna forma la relación fundamental entre el Territorio y la Potencia Administradora. Aunque los Estados Unidos habían tratado de presentar a la convención como un medio para cumplir la resolución 1514 (XV), en realidad se había dado a aquélla un mandato reducido que excluía toda posibilidad de discutir la cuestión de la

independencia. La convención había sido convocada en virtud de la Ley No. 2082 del órgano legislativo de las Islas Vírgenes, que había sido aprobada por el Gobernador en abril de 1964. El artículo 2 de esa Ley establecía que la convención podía preparar y dar su acuerdo a enmiendas a la Ley Orgánica Revisada para dar a la población un control mayor de sus propios asuntos. Evidentemente, la Ley no solamente impedía el examen de la independencia u otra solución tal como la de constituir una federación, sino que en realidad señalaba el camino hacia la integración con los Estados Unidos. Era significativo que el primer párrafo del preámbulo de la Ley se refiriera a los ejemplos de Alaska, Hawaii y Puerto Rico.

23. El representante de los Estados Unidos había declarado que el Gobierno de su país estaba estudiando algunas de las propuestas de la convención, mientras que otras requerirían enmiendas a la Constitución Federal; en otras palabras, se había aplazado la decisión respecto de las propuestas principales. Los acontecimientos recientes en el Territorio habían revelado que no se había cumplido la recomendación hecha por el Comité Especial, de que las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplicaran plenamente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esa recomendación, junto con las otras conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité Especial en 1964, seguía siendo válida y debía ser reafirmada por el Subcomité.

24. El representante de los Estados Unidos de América dijo que los miembros de la Convención Constitucional habían sido elegidos sobre la base más amplia posible, y la convención no había estado obligada a mantener la relación del Territorio con la Potencia Administradora. Se habían hecho recomendaciones importantes en materia de autonomía local, pero la convención se había opuesto a la independencia respecto de los Estados Unidos. Esto le parecía al representante una clara indicación de las opiniones actuales de la población. Sin embargo, las propuestas no impedían el futuro adelanto constitucional del Territorio.

25. No se le había impedido a la convención hacer recomendaciones sobre la relación del Territorio con la Potencia Administradora. La ley que preveía la convención había sido promulgada por el propio órgano legislativo de las Islas Vírgenes, y no había habido presión externa. Los resultados de la convención constituían un paso importante en el desarrollo constitucional del Territorio y una clara expresión de los deseos de la población respecto de su porvenir.

26. El representante del Irán dijo que estaba de acuerdo en que sería útil para el Subcomité disponer de información adicional procedente de fuentes distintas de la Potencia Administradora. Si la información suministrada por la Potencia Administradora fuera insuficiente, el Subcomité podría quizás recomendar que el Comité Especial repitiera su sugerencia respecto de una misión visitadora al Territorio.

27. El representante de Bulgaria señaló que, en virtud de la Ley Orgánica Revisada del 31 de diciembre de 1960, la ley que preveía la celebración de la Convención Constitucional, al igual que todas las demás leyes del órgano legislativo de las Islas Vírgenes, estaba sometida a la sanción y aprobación del Gobernador nombrado por las autoridades de los Estados Unidos, y era en realidad, por lo tanto, una ley de los Estados Unidos. Podía ser que este hecho hubiera influido en las estipulaciones contenidas en la ley relativa a los asuntos que había de examinar la convención. El efecto de estas disposiciones había sido permitir que se adoptaran decisiones sobre la administración local solamente, sin referencia a la posibilidad de cambiar el carácter dependiente del Territorio.

28. El representante de Madagascar dijo que las condiciones económicas y sociales existentes en el Territorio eran evidentemente satisfactorias; existía un grado considerable de industrialización y el ingreso per cápita era elevado. Sin embargo, la contratación de tantos trabajadores no agrícolas extranjeros era una fuente potencial de tensiones y el repre-

sentante se preguntaba por qué era necesaria. Estaba de acuerdo con los oradores anteriores en que la información de que disponía el Comité era inadecuada.

29. El representante del Irán preguntó al de los Estados Unidos cuántos partidos políticos habían participado en la elección de delegados a la Convención Constitucional y cuál había sido la posición de los distintos participantes. Preguntó también si se habían hecho propuestas en favor de la independencia del Territorio o de alguna forma de asociación o federación con otros Territorios de la región; qué medidas había adoptado la Potencia Administradora para informar a la población sobre sus derechos en virtud de las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General; y si un ciudadano de los Estados Unidos podría ser elegido Gobernador del Territorio en virtud de la legislación propuesta.

30. El representante de la Costa de Marfil preguntó si sería posible hacer una lista de las quejas que hubieren podido formular los partidos del Territorio. Era importante que el Subcomité conociera el clima político que había en el Territorio, así como las aspiraciones de la población, para formarse un concepto más claro de la situación.

31. El representante del Uruguay dijo que la posición del representante de Bulgaria y la del representante del Irán se complementaban. El representante de Bulgaria había señalado que toda la información de que disponía el Subcomité procedía de la Potencia Administradora. El representante del Irán había manifestado que sería útil disponer de información procedente de fuentes distintas de la Potencia Administradora. La información de la Potencia Administradora no había sido refutada o puesta en tela de juicio. Si los miembros consideraban que era necesario obtener información de otras fuentes para adoptar una decisión objetiva, tal vez conveniría aplazar el debate sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos hasta que se dispusiera de tal información.

32. El representante de los Estados Unidos de América declaró que, aunque la Ley que preveía la convención había sido sancionada y aprobada por el Gobernador, esto no modificaba el hecho de que había sido promulgada por los representantes legítimos de la población del Territorio, ya que la aprobación del Gobernador era simplemente una parte normal del proceso legislativo.

33. Contestando al representante de Madagascar, explicó que el motivo de que se contrataran tantos extranjeros para labores no agrícolas en el Territorio era que en el período culminante de la temporada de turismo la oferta de mano de obra local no bastaba para satisfacer la demanda.

34. El representante de Bulgaria dijo que la exigencia de que el Gobernador aprobara todas las leyes sancionadas por el órgano legislativo de las Islas Vírgenes no era una simple formalidad; en virtud de la Ley Orgánica Revisada del 31 de diciembre de 1960, el poder ejecutivo de las Islas Vírgenes correspondía "a un funcionario ejecutivo con el título oficial de Gobernador de las Islas Vírgenes", y debía ser desempeñado bajo la fiscalización del Gobierno de los Estados Unidos. Además, el Gobernador conservaba su cargo "según la voluntad del Presidente" y podía "vetar cualquier ley, según lo previsto en esta ley". La aprobación definitiva de la legislación estaba, por lo tanto, en manos de la Potencia Administradora.

35. El representante del Uruguay dijo que, cuando se había aprobado la ley que disponía la convocatoria de la Convención Constitucional, los Estados Unidos, mediante el veto del Poder Ejecutivo, habían dispuesto claramente de un medio para ejercer presión sobre el órgano legislativo de las Islas Vírgenes. La delegación del Uruguay temía que pudiera ser limitado el derecho de la población a expresar libremente sus opiniones sobre su condición futura. El representante del Uruguay preguntó al de los Estados Unidos si, en el caso de que elecciones libres celebradas en el Territorio revelaran un deseo abrumador de obtener la independencia incondicional, esa decisión requeriría una ley del Congreso de los Estados Unidos para hacerla efectiva.

36. El representante de Bulgaria señaló que los delegados a la convención habían propuesto no sólo que el Gobernador fuera un funcionario elegido sino que se aboliera su poder de vetar la legislación local. Esto era una indicación de que la población del Territorio se oponía a las restricciones existentes sobre la libertad de acción de su órgano legislativo.

37. El representante de los Estados Unidos de América dijo que su delegación tenía la esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara en un futuro cercano las propuestas para cambiar el estatuto del Gobernador. Ya habían sido aprobadas por la Cámara de Representantes y esperaban la aprobación del Senado.

38. El representante del Uruguay dijo que su delegación se había enterado con beneplácito de que estaba en vías de satisfacerse uno de los requisitos fundamentales para que el Territorio alcanzara el gobierno propio. Esperaba que, en la información adicional que suministraría al Subcomité, el representante de los Estados Unidos diera una indicación de la fecha en que podía esperarse la aprobación del Senado para la medida de que se trataba.

39. El representante de Italia dijo que, a juicio de su delegación, las preguntas planteadas al representante de la Potencia Administradora por los representantes del Irán, el Uruguay y Madagascar eran especialmente útiles, ya que indicaban el tipo de información que necesitaba el Subcomité para su labor. El actual estatuto constitucional del Territorio era motivo de preocupación y era de esperar que el Congreso de los Estados Unidos aprobara dentro de poco tiempo las propuestas formuladas por la Convención Constitucional de 1965 relativas a la elección de Gobernador. La abolición de la facultad de veto del Gobernador constituiría un progreso muy importante.

40. El interés que habían mostrado los miembros del Subcomité por la evolución política en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos indicaba que comprendían que su principal misión no era la de debatir la historia de los territorios coloniales, sino la de hacer lo posible por facilitarles un futuro mejor. Por lo tanto, el Subcomité debía alentar a la Potencia Administradora a que perseverara en su política actual, que sin duda culminaría en la libre determinación del pueblo del Territorio.

41. El representante de Venezuela dijo que, aun cuando se disponía de poca información sobre el Territorio, su delegación apreciaba los esfuerzos del representante de los Estados Unidos por llenar los claros y presentar un informe sobre su evolución general.

42. El citado representante recapituló las propuestas más importantes hechas por la Convención Constitucional de 1964, y expresó la esperanza de que serían llevadas a la práctica sin dilaciones indebidas por la Potencia Administradora, cumpliendo de esa manera las aspiraciones libremente expresadas por los isleños. El Subcomité debía ser informado sobre las diversas fases del proceso de aplicación de dichas propuestas.

43. Los datos facilitados al Subcomité indicaban que la población de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos estaba disfrutando de los beneficios de una economía en expansión, y que el ingreso per cápita era de 2.000 dólares. El representante de Venezuela confiaba en que la buena situación económica del Territorio, unida a una mayor participación de los isleños en la vida política, prepararía rápidamente a éstos para decidir con madurez sobre su futuro estatuto político.

44. El representante de los Estados Unidos de América expresó el pleno acuerdo de su delegación con la premisa de que el proceso de libre determinación exigía que la población de un territorio fuera informada sobre las posibilidades que se le ofrecían acerca de su futuro estatuto político y que estuviera en condiciones de expresar su opción libremente por conductos dignos de confianza. De conformidad con la Ley Orgánica Revisada de 1954, el órgano legislativo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tenía plenas facultades para entender en todos los asuntos en el orden local que no fueran

incompatibles con la propia Ley Orgánica ni con las leyes de los Estados Unidos que regían en el Territorio. Al órgano legislativo le estaba vedado promulgar ley alguna que pudiera afectar a los derechos que tenían los Estados Unidos en virtud de disposiciones contractuales, así como gravar las propiedades de los no residentes con impuestos mayores que los aplicados a las propiedades de los residentes de las islas. Difrutaba de plena autonomía en la recaudación, fiscalización y empleo de fondos, con la sola excepción de los impuestos recaudados en los Estados Unidos sobre el ron importado de las islas, y aunque el Gobierno de los Estados Unidos nunca había ejercido su derecho a este respecto, la Convención Constitucional de 1964 había propuesto que renunciara formalmente a ellos. La Ley Orgánica, que era la actual "Constitución" de las Islas Vírgenes, había sido promulgada por el Congreso de los Estados Unidos previa consulta plena con la población, incluso la celebración de audiencias y de un referéndum. El hecho de que las propuestas para modificar la ley estuvieran sujetas a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos indicaba meramente que la evolución política del Territorio hacia la libre determinación había de ser determinada conjuntamente por los isleños y el Gobierno Federal, como había ocurrido con otros antiguos territorios coloniales, con la notable excepción del régimen ilegal de Smith en Rhodesia del Sur. El informe de la Convención Constitucional era en realidad una revisión completa de la Ley Orgánica, en que se pedía una importante extensión de la autonomía interna.

45. En el Subcomité se había insinuado que el Gobernador de las Islas, como funcionario nombrado por el Gobierno de los Estados Unidos en virtud de sus facultades para vetar proyectos de ley, servía de instrumento del Gobierno Federal para inhibir las auténticas iniciativas locales. Sin embargo, la experiencia de los isleños y el informe del propio Gobernador parecían refutar esa insinuación. En el ejercicio de sus facultades, el Gobernador, que había nacido y se había criado en las islas, daba la prioridad a los supremos intereses de los habitantes. El Gobernador había calificado las propuestas de una mayor autonomía local formuladas por la Convención Constitucional como documento sensato y práctico que debía servir de ley fundamental del Territorio, y había instado al Congreso de los Estados Unidos a que la aprobara como medio de conceder un gobierno autónomo a las islas. También había tomado la iniciativa de recomendar que el Gobierno Federal aprobara la propuesta de la convención encaminada a que el Gobernador fuera elegido por la población, y ciertamente esa recomendación contaba con el pleno apoyo de los Estados Unidos. Todo ciudadano de los Estados Unidos — y los naturales de las Islas Vírgenes eran todos ellos ciudadanos de los Estados Unidos — con cinco años de residencia en el Territorio, tendría derecho a presentarse como candidato a Gobernador.

46. La Convención Constitucional, que había concebido los cambios profundos propuestos respecto de la estructura política y constitucional del Territorio, había sido el resultado de una iniciativa adoptada libremente por el órgano legislativo, y los propios representantes elegidos eran los que habían determinado el alcance de los debates de la convención. La legislación respectiva no había excluido la discusión de cambios en la relación existente entre las islas y los Estados Unidos, y la resolución sobre el estatuto político aprobada por la convención indicaba que ésta no había considerado que ese problema fuese ajeno a su competencia. Por otra parte, se había concentrado la atención en las medidas políticas que habían de afianzar la evolución constitucional hacia la libre determinación, con preferencia a los cambios bruscos que pudieran modificar esa relación. La convención había procurado perfeccionar el órgano legislativo como medio de expresar las opiniones definitivas de la población sobre su futuro estatuto, pero en manera alguna había perdido el derecho a sugerir cambios en tal estatuto.

47. La Convención Constitucional había estado compuesta de treinta y tres miembros, veintidós elegidos entre toda la población y once entre los legisladores. Todo isleño que con-

siguiera 25 firmas de votantes registrados tenía derecho a ser designado candidato. En la campaña electoral habían tomado parte activa tres partidos políticos. El partido demócrata había elegido dieciséis miembros, el partido republicano había elegido un miembro de representación general, y el partido de las Islas Vírgenes había elegido un miembro de representación general y dos miembros de Santa Cruz. Habían sido elegidos dos miembros independientes, no afiliados a ningún partido. De los legisladores elegidos, seis representaban a la facción "mortar and pestle" del partido demócrata, mientras que cinco representaban a la facción opuesta llamada "donkey". La independencia con respecto a los Estados Unidos no había constituido un tema importante en la campaña electoral, debido a que parecía haber poca o ninguna agitación en ese sentido. Sin embargo, no había razón para que la cuestión de la independencia no llegara a plantearse; los isleños estaban en completa libertad para hacer campaña a favor de ella, considerando que se les habían dado a conocer plenamente las posibilidades sugeridas por las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General. Gracias a las comunicaciones directas y frecuentes con residentes de otras islas del Caribe y con miles de turistas, los isleños se encontraban en excelentes condiciones para hacerse duchos en política.

48. Los trabajadores migrantes eran necesarios para satisfacer la demanda de mano de obra durante el auge de la temporada turística. Sin embargo, conforme a la legislación de los Estados Unidos, los que empleaban a trabajadores migrantes tenían que justificar dicho empleo demostrando a las autoridades locales que dentro de las propias islas no se podían conseguir trabajadores adecuados.

49. Las Islas Vírgenes estaban adoptando importantes medidas políticas para acelerar su evolución hacia la libre determinación. Prueba concreta de ese proceso continuo era el anuncio del día 31 de agosto de 1966 de que el Presidente de los Estados Unidos había ratificado con su firma la ley relativa a una nueva distribución del órgano legislativo, destinada a hacerlo más representativo. La propuesta respectiva había sido una de las más importantes recomendaciones de la Convención Constitucional.

50. El representante de Venezuela preguntó qué nuevas medidas había adoptado el Gobierno de los Estados Unidos para dar efectividad a las propuestas de la Convención Constitucional.

51. El representante de los Estados Unidos de América contestó que el Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos había presentado al Congreso proyectos de ley a los efectos de que el Gobernador y el Vicegobernador de las islas fueran elegidos por voto popular, y de suprimir las facultades del Gobernador para vetar la legislación local. La Cámara de Representantes ya había aprobado esos proyectos de ley, que estaba estudiando el Senado. El Congreso también tenía a la vista un proyecto de ley por la que se liberalizaría la facultad del órgano legislativo de las Islas Vírgenes para recabar fondos mediante una emisión de bonos. Todavía se encontraban pendientes las propuestas de reconocer a un representante de las Islas Vírgenes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de permitir que los naturales de las Islas Vírgenes votaran en las elecciones de los Estados Unidos, y de suprimir las facultades del Congreso de los Estados Unidos — que éste no empleaba — de vetar las decisiones del órgano legislativo de las Islas Vírgenes. Estas propuestas requerían la introducción de modificaciones en la Constitución de los Estados Unidos.

52. El representante de Bulgaria preguntó cuál era la distribución del ingreso nacional de las Islas Vírgenes entre los profesionales, empleados, trabajadores, campesinos y empresas privadas de la población. También deseaba saber si todos los habitantes tenían derecho a ser propietarios en pie de igualdad, a quién pertenecían las diversas organizaciones turísticas, y cuál era el grado de participación en la propiedad y dirección correspondiente a personas de los Estados Unidos y a autóctonos de las Islas Vírgenes. Finalmente, le agradaría

recibir información sobre el número de habitantes autóctonos matriculados en escuelas primarias y secundarias y centros de enseñanza superior.

53. El representante de los Estados Unidos de América dijo que trataría de obtener la información detallada requerida por los miembros del Subcomité; sin embargo, no sabía si se disponía de datos tales como las estadísticas de distribución del ingreso por ocupaciones. La cifra del ingreso per cápita en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se había comunicado con el objeto de indicar las cantidades gastadas en el Territorio, y su delegación reconocía que no había dado un cuadro completo de los niveles de ingresos dentro de las diferentes clases de ocupaciones. En cuanto a los fondos públicos gastados en enseñanza, vivienda y otros fines sociales, la delegación de los Estados Unidos consideraba que las estadísticas presentadas en su declaración inicial sobre el Territorio eran prueba convincente de que el Gobierno estaba empleando una parte considerable de las riquezas creadas en las islas en provecho de toda la población.

54. El representante del Irán dijo que la evolución política del Territorio era incluso más importante que el progreso significativo logrado en la esfera económica, social y educativa. Si los cambios propuestos por la Convención Constitucional eran aceptados enteramente por el Gobierno de los Estados Unidos, darían a los isleños una mayor medida de autonomía; sin embargo, los procedimientos aplicados en la elección de delegados a esa convención no habían sido enteramente satisfactorios. No se sabía a ciencia cierta si se había informado a los habitantes acerca de las diversas formas de estatuto político por las que podían optar, tales como la integración, la libre asociación, la federación o la independencia. Aun en el caso de Barbada, que había optado por la independencia, el Subcomité había estudiado con bastante detenimiento la posibilidad de crear una federación. El Subcomité se daba cuenta también de que, en el caso de las Islas Vírgenes Británicas, se había expresado en un tiempo el deseo de unirse a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Además, al hacer suyas las conclusiones del Comité Especial en 1964, la Asamblea General había llamado la atención sobre esta cuestión al declarar que los pueblos de los pequeños Territorios del Caribe tal vez pudieran valerse de una de las formas mencionadas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General para cumplir los objetivos de la resolución 1514 (XV). No se habría planteado esta duda si la Potencia Administradora hubiese permitido cierto grado de supervisión internacional del procedimiento empleado para determinar los deseos del pueblo, como habían hecho las autoridades de Nueva Zelanda en el caso de las elecciones celebradas en las Islas Cook. Cabía esperar que en lo sucesivo la Potencia Administradora tuviera en cuenta estas consideraciones y diera al pueblo del Territorio la oportunidad de obtener el estatuto constitucional que más respondiera a sus necesidades.

55. El representante de la Costa de Marfil dijo que a su delegación le había sorprendido la vehemencia expresada en la resolución que sobre el estatuto del Territorio había aprobado la convención (véase cap. XXII, párr. 15), y se preguntaba por qué los delegados habían estimado necesario manifestarse en una forma tan enfática. Podría ser conveniente que el Subcomité oyese las opiniones de la Potencia Administradora acerca de las perspectivas de independencia para el Territorio.

56. El representante de los Estados Unidos de América dijo que su Gobierno creía sinceramente en el derecho de las Islas Vírgenes a la independencia o a cualquier otra solución que eligieran los isleños. Ciertamente, el propósito de los cambios en la forma actual de gobierno era dar a la población la más amplia oportunidad posible de expresar sus deseos a este respecto. Su delegación estaba convencida de que, cuando fueron elegidos los delegados a la convención, los habitantes del Territorio conocían perfectamente todas las formas posibles de estatuto constitucional que podían escogerse.

57. El representante de Bulgaria dijo que la política de la Potencia Administradora sólo ofrecía al Territorio la posibi-

lidad de optar por la integración con los Estados Unidos. La delegación de Bulgaria seguía creyendo que el hecho de que la Potencia Administradora pudiera vetar la legislación había tenido el efecto de limitar las cuestiones que debían discutirse en la convención.

58. El representante del Uruguay observó que el principio de descolonización suponía el examen del concepto de autonomía, que en el caso de los pequeños territorios podía tomar cualquiera de las formas definidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Por lo tanto, en el estudio del Subcomité sobre esos Territorios las solicitudes de información detallada acerca de cuestiones tales como la distribución del ingreso se justificaban en la medida en que tenían por objeto establecer la viabilidad económica del Territorio, pero no se justificaban si su propósito era determinar la forma política que la futura nación llegaría probablemente a adoptar. Para tal fin bastaba con que el Subcomité estableciera si el actual sistema político, económico y social ofrecía al pueblo un nivel de vida razonable y medios adecuados de expresión política. A juicio de la delegación uruguaya, las disposiciones descritas por el representante de los Estados Unidos con respecto a la elección de delegados a la Convención Constitucional parecían haber sido suficientes para asegurar una asamblea verdaderamente representativa, y la forma de autonomía descrita en la resolución aprobada por la convención parecía ser la que los habitantes de las Islas Vírgenes deseaban verdaderamente; por más que varios miembros del Subcomité la considerasen heterogénea, no era incompatible con los principios enunciados en la resolución 1541 (XV), que el Subcomité tenía el deber de interpretar en conjunción con la resolución 1514 (XV) en el caso de los Territorios a los cuales se aplicaban ambas resoluciones.

59. El representante de Bulgaria dijo que el documento básico en cuestiones de descolonización era la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y su delegación se había opuesto siempre a todo intento de dar la misma importancia a la resolución 1541 (XV), que tenía un objetivo limitado. El derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia era sagrado, y un territorio que no era independiente no podía gozar del pleno ejercicio de sus derechos de conformidad con la resolución 1514 (XV).

60. La cuestión de la distribución de la riqueza en el Territorio era importante porque las cifras relativas al ingreso per cápita podrían no bastar para dar una idea general de los salarios en los territorios que tenían pocos habitantes. El representante de Bulgaria advirtió que según el inciso e del Artículo 73 de la Carta las Potencias administradoras tenían la obligación de transmitir información sobre el adelanto económico y social de los territorios bajo su administración, y los miembros tenían el derecho e incluso el deber de obtener la mayor información posible.

61. El representante del Irán sostuvo que la labor del Subcomité debía basarse en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y que el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia era inalienable. El Subcomité tenía dos tareas principales: asegurarse que los pueblos recuperaran su soberanía, y verificar, en lo posible mediante la presencia de algún organismo internacional imparcial, que habían recobrado efectivamente la verdadera soberanía. Una vez hecho esto, los pequeños territorios con población reducida, donde las condiciones económicas y geográficas justificaran un estatuto tal como una federación o una asociación, debieran ser libres de escoger el porvenir que mejor les pareciera. La resolución 1541 (XV) de la Asamblea General ofrecía una guía para tales formas de estatuto, y el mismo Subcomité había declarado en 1964 (A/5800/Rev.1, cap. XXV, anexo, párr. 102) que podría ser conveniente para los pueblos de algunos de los Territorios del Caribe realizar los objetivos de la resolución 1514 (XV) teniendo en cuenta las formas mencionadas en la resolución 1541 (XV).

62. El representante de Italia dijo que la nueva información proporcionada por el representante de los Estados Unidos reforzaba el parecer de su delegación de que en las Islas

Virgenes de los Estados Unidos se estaban produciendo importantes acontecimientos políticos, y de que el Subcomité debería estimular a la Potencia Administradora a que continuara aplicando sus actuales medidas.

B. Aprobación del informe

Votaciones

63. El Subcomité examinó sus conclusiones y recomendaciones relativas al Territorio (véase párr. 74 *infra*) en sus sesiones 55a. a 57a., celebradas los días 15 y 16 de septiembre de 1966.

64. Los incisos 1) a 5) y 8) de las conclusiones y recomendaciones fueron aprobados por consenso, en tanto que los incisos 6) y 7) fueron aprobados por votación, cuyo resultado fue como sigue:

a) A petición del representante de Bulgaria, se votó por separado sobre las palabras "sin excluir las contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General", del inciso 6). El Subcomité aprobó esas palabras por 6 votos contra 1.

b) A petición del representante de Bulgaria, se celebró una votación nominal separada sobre las dos frases del inciso 7). El Subcomité aprobó la primera frase en votación nominal, por 7 votos contra ninguno. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor: Bulgaria, Costa de Marfil, Irán, Italia, Madagascar, Uruguay, Venezuela.

Votos en contra: Ninguno.

c) El Subcomité aprobó la segunda frase en votación nominal, por 6 votos contra 1. El resultado de la votación fue como sigue:

Votos a favor: Costa de Marfil, Irán, Italia, Madagascar, Uruguay, Venezuela.

Votos en contra: Bulgaria.

d) El Subcomité aprobó el inciso 7) en su totalidad por 6 votos contra 1.

65. El Subcomité aprobó sus conclusiones y recomendaciones en su totalidad por 6 votos contra ninguno y 1 abstención.

Declaraciones de los miembros acerca del inciso 6)

66. El representante de Bulgaria dijo que se oponía decididamente a toda referencia a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Esta resolución se refería únicamente a la transmisión de información por la Potencia Administradora. La tarea del Comité Especial era totalmente diferente, pues consistía en ayudar a los pueblos a ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Las dos resoluciones no eran en modo alguno complementarias y nunca se las había interpretado conjuntamente. La resolución 1514 (XV) ofrecía plenas garantías de que los pueblos podrían elegir libremente su futuro.

67. El representante de Italia estimó que no era del todo exacto afirmar que nunca se había establecido una relación entre las dos resoluciones mencionadas. Señaló a la atención del Subcomité el informe del Comité Especial correspondiente a 1964 (A/5800/Rev.1, cap. XXV, párr. 310) en el que el Comité Especial, en las conclusiones generales del informe relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, hacía constar que "en un mundo caracterizado por el movimiento integracionista, podría ser conveniente para los pueblos de esos territorios [es decir, los pequeños] realizar los objetivos de la resolución 1514 (XV) teniendo en cuenta las formas mencionadas en la resolución 1541 (XV)". Hacía dos años había empezado a plantearse el problema de los territorios pequeños y a ese respecto existía una cierta práctica que no se podía modificar ahora, incluso en el caso de que la Asamblea General no hubiese tenido en absoluto la intención, cuando aprobó la resolución 1541, de considerar este texto como una interpretación de la resolución 1514.

68. El representante del Uruguay dijo que resultaba muy importante citar en el inciso 6) la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General al mismo tiempo que la resolución 1514 (XV). Aun si esos dos textos fueran aparentemente contradictorios, habría que tratar de interpretarlos en el sentido más armónico. Mas ambas resoluciones eran, en realidad, perfectamente conciliables, lo cual nada tenía de sorprendente si se consideraba que la Asamblea las había aprobado con un día de diferencia. En la resolución 1514 (XV) se exponían principios generales y en la resolución 1541 (XV), en cambio, se procuraba considerar, en particular, el caso de los pequeños territorios y de exponer las modalidades para que éstos se asociaran a otros países, sin desmedro del principio de independencia. El representante recordó que, en la práctica, al tratarse de otros territorios pequeños, lejos de combatirse se había preconizado la fórmula de la federación y hasta se había llegado a pedir a la Potencia Administradora interesada que favoreciera la constitución de una federación. Con todo, la delegación del Uruguay no se proponía en absoluto indicar a los pueblos interesados el camino que deberían seguir. Sus observaciones sólo atañían al orden de los principios.

69. El representante de Madagascar estimó que una referencia a la resolución 1541 (XV) podría restringir las opciones que se ofrecían a los habitantes de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y que las otras posibilidades enumeradas en ella ya estaban previstas en la resolución 1514 (XV). No obstante, en un espíritu de conciliación, estaba dispuesto a apoyar la propuesta que se había hecho en el Subcomité.

Declaraciones de los miembros acerca del inciso 7)

70. El representante de Bulgaria dijo que, si bien era aceptable, en principio, la idea de la presencia de las Naciones Unidas durante el ejercicio del derecho de libre determinación, tal como se mencionaba en la segunda frase del inciso 7), la situación actual en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos era tal que la población no tenía posibilidad de elegir con toda libertad su condición política futura. Desde que los Estados Unidos habían asumido el poder en las Islas Vírgenes, las estructuras económicas, políticas y militares del Territorio habían sido concebidas en el sentido de una asociación con la Potencia Administradora o de una anexión. En esas condiciones, era muy lógico temer que la participación de las Naciones Unidas en la organización de un plebiscito las comprometiera a dar su sanción a una solución prefabricada por la Potencia Administradora. Sólo cuando se estuviera en posesión del informe de la misión visitadora se podría determinar si debían adoptarse nuevas medidas conforme a las decisiones pertinentes de la Organización.

71. El representante del Irán dijo que el Comité Especial debía tener presente que tenía por misión lograr la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General con respecto a todas las colonias, incluidos los pequeños territorios. Sin embargo, estos últimos, por sus circunstancias especiales, tales como lo reducido de su tamaño y de su población y la naturaleza de su economía, eran sumamente vulnerables a las presiones exteriores, en particular a las ejercidas por la Potencia Administradora respectiva. En esas condiciones, la presencia de las Naciones Unidas era indispensable para asegurar que el pueblo del Territorio de que se tratase pudiera ejercer su derecho a la libre determinación con libertad y sin restricciones. Tal presencia de las Naciones Unidas sería el único medio posible de cerciorarse de que la decisión de la población correspondía a sus deseos libremente expresados.

72. El citado representante no podía aceptar la tesis de que, en el caso de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la presencia de las Naciones Unidas sólo podía servir de instrumento dócil de sanción. Tenía mejor opinión de la integridad de los miembros. Tampoco podía aceptar que la población de las islas fuera tan dependiente de los Estados Unidos que en cualquier circunstancia votaría exactamente como quisiera ese país. Las Naciones Unidas no podían influir en el comportamiento y las motivaciones subconscientes

de la población, pero lo que sí podían y debían hacer era proporcionar las condiciones necesarias para crear un clima en el que la población pudiese pronunciarse sobre su futuro estatuto con libertad y sin restricciones. Esto sólo se podría lograr si un órgano internacional imparcial estuviera en condiciones de fiscalizar y garantizar la celebración del referéndum o el ejercicio de la libre determinación con plena libertad y sin ninguna restricción. Esta propuesta no era nueva puesto que el Comité Especial ya había decidido que la presencia de las Naciones Unidas era necesaria en otros territorios tales como Adén y el África Sudoccidental.

73. El representante del Uruguay manifestó que las declaraciones del representante de Bulgaria eran pesimistas. Parecían poner en duda la autoridad de las Naciones Unidas y dar a entender que el poderío material, económico y político de los Estados Unidos prevalecería sobre el prestigio y la autoridad de las Naciones Unidas en la esfera jurídica. Dijo que, por lo que a él concernía, reiteraba su fe en las Naciones Unidas y seguiría luchando por que se aplicaran los procedimientos de la Organización. Explicando su voto sobre el inciso 7), el representante del Uruguay dijo que si la sugestión del representante de Bulgaria de suprimir la segunda frase hubiese contado con el apoyo unánime del Subcomité, hubiera preferido esa solución, pero no habiendo ocurrido así, se había visto obligado a votar las dos partes del inciso en cuestión en la forma en que lo había hecho.

C. Conclusiones y recomendaciones

74. El Subcomité recomienda que el Comité Especial adopte las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones que sobre el Territorio adoptó en 1964 y que fueron ratificadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales tiene plena aplicación al Territorio.

3) Toma nota de la información proporcionada por la Potencia Administradora en relación con la Convención Constitucional que se reunió en diciembre de 1964 a febrero de 1965 y que propuso una nueva Ley Orgánica para el Territorio, que prevé un mayor grado de autonomía.

4) Toma nota también de que la Potencia Administradora hasta el momento sólo se ha pronunciado definitivamente sobre una de las propuestas formuladas por la convención y que todavía no se ha aprobado como ley la propuesta sobre un gobernador electivo.

5) Deplora que, pese a cierto grado de progreso en materia política, la Potencia Administradora no haya dado cumplimiento todavía a la Declaración en relación con el Territorio y le insta a que lo haga sin demora.

6) Reafirma el derecho del pueblo a ejercer su derecho de libre determinación con completa libertad y reitera su anterior recomendación en la que invitaba a la Potencia Administradora a asegurar que la población del Territorio pueda expresar, con plena libertad y sin restricciones de ningún género, sus deseos en orden a la futura situación política del Territorio. Invita asimismo a la Potencia Administradora que procure que la población del Territorio se percate plenamente de las diversas posibilidades que se le ofrecen, sin excluir las contenidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General en la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

7) Reitera su convencimiento de que las Naciones Unidas deben cerciorarse de que el ejercicio del derecho de libre determinación se practica con plena libertad y con total conocimiento de las posibles opciones. Considera, por consiguiente, que es indispensable la presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación.

8) El Comité Especial deplora que la Potencia Administradora no haya aceptado que una misión visitadora del Co-

mité Especial se traslade al Territorio y afirma que una visita al Territorio es, a la vez, útil y necesaria. En consecuencia, invita a la Potencia Administradora a prestar su cooperación para que las Naciones Unidas puedan enviar una misión visitadora al Territorio a fin de obtener información directa acerca del Territorio y cerciorarse de la opinión de la población y de la medida en que ésta tiene conocimiento de las opciones que se le ofrecen en relación con su futura situación política.

III. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, BARBADA, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTÓBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCÍA Y SAN VICENTE

A. Examen por el Subcomité

Introducción

75. El Subcomité se ocupó en el examen de estos Territorios en las sesiones indicadas a continuación:

<i>Territorio</i>	<i>Sesiones</i>
Barbada	46a. a 49a., 59a.
Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas	48a., 51a., 52a., 57a. a 59a.
Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente	53a., 59a.

76. El Subcomité tuvo a la vista documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 32 a 193). Los miembros del Subcomité escucharon asimismo la declaración del Sr. Gairy, jefe de la oposición y peticionario de Granada, formulada en la 463a. sesión del Comité Especial, el 7 de septiembre de 1966.

77. En conformidad con el procedimiento acordado por el Comité Especial, y por invitación del Presidente, el representante del Reino Unido, la Potencia Administradora, participó en la labor del Subcomité sobre esos Territorios.

Declaraciones generales

a) Barbada

78. El representante del Reino Unido indicó que de los ocho territorios de las islas del Caribe examinados por el Subcomité conjuntamente en 1964, el de Barbada es el más grande y el más populoso. Añade que en esa época el representante del Reino Unido describió circunstanciadamente los antecedentes históricos, económicos y políticos de la situación en Barbada, así como los esfuerzos que a la sazón se hacían para ver si podía hallarse una base de acuerdo respecto a una nueva Federación entre los ocho Territorios: Barbada y las Islas Windward y Leeward. El Gobierno del Reino Unido sostuvo entonces, y seguía sosteniendo, que una asociación más estrecha entre esos Territorios ofrecía a la región las mejores perspectivas futuras. Sin embargo, se trataba de un asunto que los Territorios mismos habían de decidir, y tras largas e intrincadas negociaciones se había visto claramente que por el momento no podía hallarse ninguna base de acuerdo para una federación u otra forma de asociación. En agosto de 1965 el Gobierno de Barbada publicó un Libro Blanco en el cual anunció que, en tales circunstancias, se proponía buscar la independencia separadamente.

79. Los acontecimientos que condujeron a la celebración de la reciente Conferencia Constitucional de Londres se describieron en un documento de trabajo de la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 158 a 167). La decisión más importante de esa Conferencia figuró en la declaración del Secretario de Estado para las Colonias de fecha 1° de julio de 1966, en la cual se declaraba que el Gobierno del Reino Unido había convenido en que Barbada pasara a ser independiente el 30 de noviembre de 1966.

80. La delegación de Barbada a la Conferencia incluía a representantes del partido del Gobierno — el Democratic Labour Party — y de los dos partidos de oposición representados en la Legislatura. Los tres partidos estaban de acuer-

do en que Barbada debía lograr la independencia separadamente y convertirse en miembro del Commonwealth.

81. La Conferencia tuvo que hacer frente a la insólita tarea de redactar una Constitución de independencia para un territorio que en su larga historia de gobierno democrático, con una legislatura que se remontaba a 1627, había ido desarrollando una Constitución principalmente basada en reglas y costumbres comúnmente aceptadas, como las de la madre Patria. Era inevitable, pues, que hubiera divergencias de opinión entre los partidos políticos de Barbada acerca de la inclusión u omisión de determinadas disposiciones, sobre algunas de las cuales era imposible lograr la unanimidad. Sin embargo, la nueva Constitución siguió muy estrechamente el proyecto presentado por el Gobierno de Barbada y era análoga a las de otros Territorios que habían sido del Reino Unido y se habían vuelto independientes.

82. La Constitución había de contener disposiciones relacionadas con la ciudadanía, los derechos humanos fundamentales, el nombramiento y las funciones de un Gobernador General que representara a la Reina — que sería Cabeza del Estado —, el Parlamento, el Ejecutivo, la Judicatura, la Administración Pública y las comisiones de servicio, y las finanzas. Muchas de las disposiciones fundamentales, incluso las relacionadas con la modificación de la propia Constitución, quedarían establecidas firmemente; en otras palabras, se fijarían procedimientos especiales para su reforma. Los principales puntos sobre los cuales los partidos de oposición habían registrado su desacuerdo fueron la composición del Senado (la cámara alta no elegida), la no fijación precisa de las disposiciones relativas a las condiciones de calificación y no calificación para poder ser miembro de la Cámara (la cámara baja totalmente electiva) y la ausencia de una disposición relativa a los arreglos de circunscripciones y a las comisiones de elecciones y de límites.

83. Un asunto de interés especial en relación con la fecha acordada para la independencia era que, conforme a la Constitución, el período de una legislatura seguiría siendo de cinco años y la convocatoria a nuevas elecciones se expediría en un plazo de noventa días. Por lo tanto, la disolución de la Legislatura existente, que databa del 19 de diciembre de 1961, se efectuaría no después del 19 de diciembre de 1966.

84. Barbada llegaría a ser así, después de Jamaica y Trinidad, la tercera que, de las diez islas antes integrantes de la Federación de las Indias Occidentales, lograría la independencia por separado. Sin embargo, el Gobierno del Territorio no tenía la intención de que la independencia impidiera en el porvenir la asociación con las restantes islas de la antigua Federación o con otros territorios. A decir verdad, ya había pasado a integrar una zona de libre comercio con Guyana y Antigua.

85. Pese a su pequeño tamaño y reducida población, Barbada tenía una economía comparativamente próspera y se enorgullecía de no haber tenido nunca que depender de ayuda externa para su presupuesto. Los naturales de la isla habían hecho una aportación valiosa al desarrollo de los muchos países en los cuales se habían establecido, a la vez que se mantenían justificadamente orgullosos de su origen. El Subcomité quizás quisiera asociarse a los votos de la delegación del Reino Unido por el porvenir de Barbada como futuro miembro de la comunidad internacional.

86. El representante del Uruguay manifestó que aunque su delegación creía que las mejores perspectivas para los territorios del Caribe residían en alguna forma de federación o asociación, el fracaso de las prolongadas negociaciones entre Barbada y las Islas Windward y Leeward para llegar a una base de acuerdo indicaba que, al menos por el momento, sería preciso abandonar las esperanzas de establecer dicha federación. La decisión del Gobierno de Barbada de tratar de obtener la independencia por separado contaba con el apoyo de los partidos de la oposición y, de todas maneras, la Constitución de la independencia contenía disposiciones sobre enmiendas constitucionales que permitían a Barbada asociarse con otros miembros del Commonwealth en alguna fecha futura, si así lo deseaba. Sin embargo, la delegación del Uruguay creía que

esas disposiciones debieran haberse sometido a una votación por mayoría de dos tercios en vez de una mayoría simple.

87. Una de las cosas que los miembros del Comité Especial habían aprendido en su labor era que el logro de la independencia por un territorio no era ya un asunto puramente político, pues las perspectivas de que un territorio pudiera bastarse a sí mismo económicamente dentro de un período razonable después de la independencia eran por lo menos tan importantes como su deseo de libertad, ya que toda nación recién independizada había de estar en condiciones de resistir las presiones políticas y económicas de Potencias más fuertes. A este respecto Barbada se encontraba en situación manifiestamente satisfactoria: su economía tenía una base sólida y el Subcomité no vacilaría en aprobar la decisión de sus representantes elegidos de procurar conseguir la independencia por separado.

88. El representante de Venezuela señaló que Venezuela, por su proximidad geográfica a Barbada, sentía especial regocijo en que la isla fuere a alcanzar la independencia en breve plazo. Tenía la confianza de que, una vez conseguida la independencia, Barbada marcharía hacia la consolidación de sus instituciones democráticas. El arribo a la independencia de otra isla del Caribe constituía un paso más hacia la total extinción del colonialismo en el Hemisferio Occidental.

89. El elevado porcentaje de acuerdo entre la población del Territorio ofrecía la mejor perspectiva posible para su futuro progreso político, económico y social, y el orador estaba seguro de que quienes tenían la tarea de dirigir sus destinos futuros harían lo posible para allanar las diferencias suscitadas.

90. La delegación de Venezuela deseaba hacer llegar al Gobierno y al pueblo de Barbada sus felicitaciones por su triunfo, así como también al Reino Unido por su contribución a tan histórico hecho.

91. El representante de Italia declaró que su delegación estaba complacida por la reciente evolución de Barbada y por el acuerdo de la Potencia Administradora en concederle la independencia. Compartía el punto de vista de que la independencia en asociación con los territorios vecinos podría haber ofrecido mejores perspectivas para el conjunto de la región, y esperaba que, lo que había resultado no ser posible hasta la fecha, se convirtiera en realidad en lo futuro. A este respecto observó que el requisito de una mayoría de dos tercios, establecido por la Constitución para modificar algunas de las disposiciones básicas, no se aplicaba a las enmiendas que daban efecto constitucional a los arreglos bajo los cuales Barbada se podía unir a cualquier otro país o territorio del Commonwealth.

92. El orador expresó los votos de su delegación al pueblo de Barbada y añadió que esperaba con interés las elecciones que se habían de celebrar en la Isla poco tiempo antes o después de la fecha de la independencia.

93. El representante de Bulgaria dijo que, al igual que en 1964, la única información disponible sobre los territorios del Caribe bajo administración del Reino Unido procedía de la Potencia Administradora. El Comité Especial y el Subcomité no podrían llevar a cabo satisfactoriamente sus tareas a menos que tuvieran la posibilidad de enviar misiones visitadoras a esos territorios.

94. Declaró que, en la 46a. sesión del Subcomité, el representante del Reino Unido había manifestado que, a juicio de su Gobierno, la mejor perspectiva de la región consistía en una asociación más estrecha de Barbada con las Islas Windward y Leeward. Dicho representante se había referido, después, a la cuestión de Barbados solamente, sin explicar por qué se había abandonado, por lo menos de momento, la idea de la federación. Pero no era posible desechar tan fácilmente la cuestión. Según la información proporcionada por la Secretaría se habían celebrado varias conferencias constitucionales, para cada Territorio por separado. Los Gobiernos de seis de los Territorios habían celebrado con la Potencia Administradora acuerdos separados que, en la mayoría de los casos, tenían por efecto el acrecentamiento del control local en asuntos internos, y la continuación de las responsabilidades del Reino Unido en lo concerniente a relaciones exteriores y defensa. El Reino Unido había convenido en conceder la independencia a Bar-

bada el 30 de noviembre de 1966. En 1964 el Comité Especial había declarado que parecía haber acuerdo general respecto a la concesión de la independencia inmediata a las Islas Windward y Leeward y Barbada y la formación de una federación. Había señalado, además, que la población de las Antillas Británicas tenían el mismo origen étnico y una lengua y una cultura comunes (A/5800/Rev.1, cap. XXV, párr. 323). En 1964 se había hecho evidente que el único obstáculo a la creación de Estados independientes o de una federación independiente era la precaria situación económica de los Territorios, cuyo presupuesto tenía que subvencionar la Potencia Administradora. A la Potencia Administradora le incumbía la responsabilidad por la situación económica y los Territorios no llegarían a ser verdaderamente independientes a menos que el Reino Unido devolviera, en parte por lo menos, lo que había sacado de ellos en siglos de ocupación colonial. Como manifestara el representante de Trinidad y Tabago en la 9a. sesión del Subcomité, si la única ayuda económica que había de recibirse era de la naturaleza o magnitud de la que estaba estudiando la Potencia Administradora, pasarían años de discusión tras discusión sin que se viera la manera de solucionar los problemas planteados. Por ello el único resultado de años de negociaciones sobre acuerdos constitucionales era la prolongación de la dependencia en que se hallan los Territorios (*ibid.*, cap. XXV, anexo, párr. 68). El Primer Ministro de San Cristóbal quizás había expresado los sentimientos de los demás participantes en las conferencias constitucionales cuando dijo que los acuerdos convenidos eran lo mejor que podía lograrse en esas circunstancias, pero que no eran del todo satisfactorios puesto que el verdadero objetivo consistía en la formación de una sola nación en el Caribe.

95. Las conclusiones y recomendaciones principales formuladas por el Comité Especial en 1964 seguían siendo válidas, en particular, la que figuraba en el capítulo XXV, párrafo 322 de su informe (A/5800/Rev.1), en el sentido de que las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General debían aplicarse a los territorios de conformidad con la voluntad libremente expresada de la población. A la luz de los párrafos 2 y 5, de la parte dispositiva de aquella resolución, el orador no consideraba que las conferencias constitucionales ofrecían el mejor medio de determinar las aspiraciones de los habitantes. La consulta popular prevista en la resolución 1514 (XV) no era una simple formalidad sino el primer acto soberano de un pueblo que ejercía su derecho inalienable de libre determinación. Al pueblo correspondía designar representantes que redactaran la constitución de un nuevo Estado independiente y soberano, para que el pueblo la aprobase. En ciertos casos los partidos de oposición habían abandonado la conferencia constitucional convocada por el Reino Unido, que entonces había concertado acuerdos con un Gobierno de minoría; y otras veces, la oposición, o tanto la oposición como el Gobierno, habían tenido que aceptar condiciones impuestas por la Potencia Administradora. Todos los nuevos arreglos para los Territorios del Caribe habían sido acordados en conferencias constitucionales.

96. Los habitantes de Barbada habían vivido con la idea de una federación, pero se iba a conceder a la isla la independencia como Estado separado, porque ella era la única que tenía capacidad para equilibrar el presupuesto sin ayuda de la Potencia Administradora. La delegación de Bulgaria haría todo lo posible por ayudar a los habitantes de las Islas Windward y Leeward y Barbada a conseguir una independencia auténtica. En Barbada había bastante divergencia de opinión sobre la cuestión de la independencia sin federación; el partido de oposición y gran parte de la opinión pública pedían que se celebraran elecciones generales de manera que el pueblo expresara su opinión sobre el futuro régimen. El Reino Unido, en vez de disponer que se eligiere una asamblea representativa que redactara una nueva constitución, había convocado a una conferencia constitucional para que discutiera un proyecto de constitución redactado sin participación de la oposición que, no obstante, se creyó obligada a participar en la conferencia. El Presidente de la conferencia, que representaba a la Potencia Administradora, no había aceptado ninguna de las propuestas de la oposición respecto a cuestiones importantes como las reformas de la constitución. En esta forma la Potencia Adminis-

tradora imponía a los habitantes de Barbada una constitución redactada bajo su influencia. Además, había razones para creer que el Gobierno organizaría elecciones para después y no antes de la independencia, de modo que la nueva Asamblea quedaría ligada por disposiciones constitucionales concebidas bajo el régimen colonial. Dadas estas circunstancias la delegación de Bulgaria sentía cierto temor respecto a las condiciones en que la Potencia Administradora se disponía a conceder la independencia a Barbada.

97. El representante de Madagascar suscribió enteramente las observaciones detalladas y bien documentadas del representante de Bulgaria. La decisión de los habitantes de Barbada de independizarse por separado concordaba con los principios expuestos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, pues parecía que la mayoría de los habitantes del Territorio estaban a favor de la nueva constitución. Como había señalado acertadamente el representante de Bulgaria, los Territorios del Caribe tenían una herencia y una cultura comunes, y si por el momento no era posible el acuerdo sobre la federación, cabía esperar que la independencia de Barbada por separado no representaba más que un momento de transición hacia una forma de asociación. Por esa razón el orador celebraría toda otra información del representante del Reino Unido respecto a la posibilidad de que a la larga fuese posible cierta forma de federación o asociación con los otros Territorios del Caribe. También acogería con satisfacción alguna información sobre la índole de los vínculos que Barbada tendría con el Commonwealth una vez obtenida la independencia.

98. El Subcomité debía prestar más atención a las consecuencias económicas y financieras de la independencia. Parecía que aún después de la independencia Barbada dependería económicamente, hasta cierto punto, del Reino Unido, pues, a diferencia de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos — cuya economía se basaba en industrias ligeras, algunas de las cuales abastecían al comercio de exportación —, la economía de Barbada se fundaba en un monocultivo al que correspondía la mayor parte de sus exportaciones. Por eso el Subcomité debería tomar cuidadosamente en consideración la cuestión del desarrollo industrial de Barbada. Además, cierta vinculación económica de dichos Territorios quizás contribuyera mucho a consolidar la independencia política del país.

99. El representante del Irán celebró que Barbada se independizara el 30 de noviembre de 1966 en conformidad con los principios de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. La independencia de Barbada representaría otro paso hacia la eliminación completa del colonialismo en el Hemisferio Occidental. El representante del Reino Unido había señalado que, a pesar de su reducida superficie y población, Barbada tenía una economía próspera y que por eso no necesitaba depender de ayuda exterior para su presupuesto. Pero el orador estimaba que, al considerar los territorios pequeños que no eran económicamente viables o que eran demasiado pequeños para independizarse por separado, las Naciones Unidas tenían que obrar con suma cautela y asegurarse de que la Potencia Administradora había hecho todo lo necesario para informar a los habitantes de los diversos territorios respecto a los diferentes tipos de independencia que se les ofrecían. Además, las Naciones Unidas deberían asegurarse de que cualquier decisión sobre el porvenir de un territorio fuese adoptada por el pueblo de éste, de conformidad con sus deseos libremente expresados.

100. El orador hubiera preferido que Barbada se uniera en una federación con las Islas Windward y Leeward. Sin embargo, el representante de la Potencia Administradora había declarado que por el momento no era posible el acuerdo sobre la federación. El orador deseaba saber si se había consultado debidamente al pueblo de los Territorios del Caribe al respecto y hasta qué punto se los había informado de las ventajas o desventajas de la independencia. Era una suerte que en Barbada los representantes de todos los matices de opinión hubiesen elegido la independencia por separado.

101. Añadió que acogería con satisfacción cualquier otra información sobre las atribuciones, al parecer bastante amplias, que se reservaban al Gobernador General. Según la nueva constitución correspondería al poder y autoridad de la Corona Bri-

tánica el nombrar y hacer cesar en el cargo al Gobernador General; por eso quería saber hasta qué punto esa relación menoscababa la soberanía e independencia de Barbada.

102. En conclusión, expresó al Gobierno y al pueblo de Barbada los mejores votos por su prosperidad y feliz porvenir. Dijo que confiaba en que la independencia les permitiría desarrollar el país en toda la medida de lo posible.

103. El representante del Reino Unido, en respuesta al representante de Bulgaria, dijo que replicaría a muchos de los puntos planteados respecto a las Islas Windward y Leeward cuando se ocupara en esos Territorios. El representante de Bulgaria había dado pruebas de gran selección al citar la exposición del representante de Trinidad y Tabago en la novena sesión del Subcomité, pues había hecho caso omiso de las observaciones que hiciera el representante del Reino Unido en su declaración del 15 de mayo de 1964 ante el Subcomité acerca de los puntos planteados por el representante de Trinidad y Tabago.

104. Añadió que repetiría lo que dijo respecto al momento en que habían de celebrarse las elecciones de Barbada, esto es, que incumbía al Gobierno de Barbada, y no a la Potencia Administradora, decidir respecto a la fecha en que se deberían celebrar las elecciones. En cuanto a la cuestión de independencia separada o la federación, como había manifestado el Secretario de Colonias el 1º de julio de 1966, todos los participantes en la Conferencia Constitucional habían convenido en que la asociación no era factible por el momento, y por eso estaban de acuerdo con la propuesta de que Barbada se independizara por separado.

105. Respondiendo a las preguntas de los representantes de Venezuela y Madagascar dijo que los Gobiernos de los Territorios interesados habían efectuado una serie de consultas sobre la posibilidad de una federación, a algunas de las cuales habían asistido representantes del Gobierno del Reino Unido. En abril de 1965, cuando se esperaba aún que pudiera lograrse una federación, el representante de Antigua había anunciado que su Gobierno no seguiría, por ese motivo, participando en las deliberaciones. Ese anuncio había dado otro giro a la situación y más adelante el Gobierno de Barbada había anunciado que tenía el propósito de procurar la independencia por separado, decisión que había sido refrendada en una resolución por el órgano legislativo del país.

106. Los propios Territorios habían llegado a la conclusión de que no era posible hallar ninguna base para ponerse de acuerdo entre ellos acerca de alguna forma de federación o asociación. Esa opinión había sido aceptada por el Gobierno del orador sin entusiasmo pero sin perjuicio también de que ulteriormente se pudiese formar una nueva federación. Añadió que la cuestión de una posible federación entre Barbada y las Islas Windward y Leeward distaba de estar descartada, pero que la decisión al respecto incumbía al Gobierno y a los habitantes de esos Territorios. Tanto el Gobierno como el partido de oposición de Barbada habían manifestado claramente que se proponían seguir alentando la idea de una federación con las Islas Windward y Leeward.

107. Las delegaciones de Barbada a la Conferencia Constitucional habían expresado unánimemente el anhelo de que al independizarse Barbada se convirtiera en miembro del Commonwealth. El Gobierno del Reino Unido había prometido comunicar su pedido a los demás miembros del Commonwealth, que indudablemente lo celebrarían.

108. En respuesta al representante del Irán, señaló que el Gobernador General sería designado por Su Majestad la Reina, en su carácter de Reina de Barbada con el asesoramiento de los Ministros de Barbada. El Gobernador General, en nombre de la Reina de Barbada, actuaría con el asesoramiento de los Ministros de Barbada, salvo en el ejercicio de poderes librados a su discreción, como el de disolución de la Asamblea y designación del Primer Ministro. Esas disposiciones eran comunes a los países independientes que reconocían a la Corona Británica.

109. El representante de Bulgaria negó que hubiese escogido sus observaciones. Se había convenido en que correspondía al Gobierno de Barbada decidir si las elecciones se habían

de celebrar antes o después de la independencia. Si se realizaban antes de la independencia cabía suponer que el pueblo tendría oportunidad de expresar su opinión sobre el proyecto de constitución. Si se celebraban después de la independencia, la nueva Asamblea quedaría ligada por las disposiciones ya convenidas y, como había dicho el orador, había buenas razones para creer que eso era lo que sucedería.

110. El representante del Uruguay dijo que el deber esencial del Comité Especial y de sus Subcomités consistía en facilitar y salvaguardar el advenimiento a la independencia de todos los territorios coloniales. Sin embargo, la independencia no debía alcanzarse a costa del abandono de los elementos que constituían una libertad auténtica. El Subcomité debería asegurarse de que la independencia concedida a un país fuera auténtica, y no puramente formal. En cuanto a la declaración hecha por el representante de Bulgaria, el orador no podría aceptar la idea de una independencia separada para Barbada si no estuviera seguro de que ése era un primer paso hacia el logro de todos los objetivos indicados en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Creía todavía que las mejores perspectivas para los Territorios del Caribe residían en cierta forma de federación o de asociación, aun cuando la forma adoptada fuese la de algún tipo de unión económica o aduanera. La integración era una fuerza con la que había que contar en el mundo moderno, e incluso los países de América Latina, que habían alcanzado niveles de desarrollo muy superiores a los de muchos de los Territorios coloniales que esperaban la independencia, seguían esforzándose por la integración económica de su continente.

111. Personalmente el orador no podía encontrar razón para oponerse a la concesión de una independencia separada a Barbada, aunque el Subcomité debiera al menos sugerir que alguna forma de federación o de asociación sería la solución más racional para los problemas de los Territorios del Caribe en su conjunto. Sin embargo, el Subcomité debería ver la realidad objetivamente. A diferencia del caso de Basutolandia, en el que diversos peticionarios habían presentado versiones a veces contradictorias de la realidad de la situación en su Territorio y habían formulado varias reclamaciones contra la Potencia Administradora, de Barbada no se habían recibido semejantes reclamaciones ni peticiones. Había que reconocer que el partido minoritario de oposición no estaba en completo acuerdo con el Gobierno de Barbada, pero eso por sí mismo demostraba que en la isla reinaban condiciones de auténtica democracia. Como no había nada que refutara las declaraciones hechas por la Potencia Administradora, era deber del Subcomité, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, el garantizar que Barbada alcanzara la independencia sin dilación. Además, una Barbada independiente podría fácilmente guiar a los Territorios del Caribe hacia una federación del tipo que parecía ser la mejor solución para el porvenir de esos Territorios. Mas, conforme había expuesto ya, seguía creyendo que las disposiciones sobre cualquier asociación con otros miembros del Commonwealth deberían ser objeto de un voto por mayoría de dos tercios.

112. El representante del Irán declaró que en las cuestiones que afectaban a los territorios pequeños las Naciones Unidas deberían proceder con suma cautela; deberían asegurarse de que los pueblos interesados hubieran ejercido su derecho de libre determinación en plena libertad y, de ser posible, bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Si el Reino Unido hubiera aceptado la idea expresada en el Subcomité y en el Comité Especial a favor de una misión visitadora, los miembros habrían estado en mejor situación para comprobar si la población del Territorio realmente deseaba la independencia separada o la federación. Como había indicado el representante de Bulgaria, toda la información sobre el Territorio procedía de una sola fuente, o sea, la Potencia Administradora. Si se hubiera podido disponer de información procedente de otras fuentes, los miembros habrían podido formarse una idea mucho más clara de la situación. Sin embargo, una vez que los representantes elegidos del Territorio habían optado por la independencia, era difícil denegarla pues la independencia era el objetivo predominante del Comité Especial, en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

113. El representante de Bulgaria hizo suyas las observaciones formuladas por el representante del Irán. Si la Potencia Administradora hubiera deseado prestar su asistencia al Subcomité en su labor, habría aceptado la idea de una misión visitadora, que había sido expresada en varias resoluciones. Era bastante anormal que el Comité Especial y el Subcomité tuvieran que servirse únicamente de la información facilitada por la Potencia Administradora cuando examinaban la situación en el Territorio. Por eso la delegación de Bulgaria había estimado que la declaración del representante de Trinidad y Tabago sería útil, especialmente dado que se trataba de un país de la misma región de Barbada, que había sido miembro de la primitiva Federación de las Indias Occidentales. Además, la declaración del representante de Trinidad y Tabago representaba una fuente de información distinta de la Potencia Administradora.

114. La delegación de Bulgaria no podía estar conforme con que se rechazara la idea de una federación, que era la solución más lógica para varias islas pequeñas. En vista de los últimos acontecimientos en el Territorio, le agradecería disponer de más información sobre tal asunto. No estaba tratando de demorar la independencia del Territorio, sino que se estaba esforzando por arrojar alguna luz sobre un aspecto poco claro de la cuestión. Todos los documentos de que disponía el Subcomité mostraban que el partido de oposición había pedido expresamente que se celebraran elecciones generales a fin de que la población pudiera expresar su opinión sobre la idea de una federación. Incluso dentro del partido del Gobierno la tendencia más importante favorecía la federación. Además, en la Conferencia Constitucional, los resultados de la votación sobre esa cuestión habían sido 14 a 9, lo que no alcanzaba a ser ni aún una mayoría de dos tercios. En la mayoría de las constituciones se precisaba un voto por mayoría de dos tercios, incluso para una enmienda. El Subcomité no podía hacer caso omiso de esos hechos.

115. El representante de Venezuela apuntó que su delegación compartía la preocupación que otros experimentaban acerca del alcance de la soberanía del Gobierno de Barbada. La libre determinación tenía dos aspectos fundamentales. Según el Profesor Rousseau, en el plano internacional, la libre determinación se distinguía por los procesos expuestos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En el plano interno, la libre determinación se caracterizaba por el derecho del pueblo a decidir libremente su destino político, económico y social. La delegación de Venezuela creía que Barbada ejercería su derecho a la libre determinación en el plano internacional, pero que ese derecho no sería ejercido en forma apropiada si hubiera algo que menguara su derecho a la libre determinación en el plano interno. Por las declaraciones de los representantes del Territorio resultaba evidente que deseaban que se les concediera la independencia cuanto antes. La delegación de Venezuela celebraría siempre cualquier medida encaminada a lograr la eliminación del sistema colonial en cualquier parte del mundo.

116. El representante de la Costa de Marfil dijo que del examen detallado de los documentos relativos a Barbada se infería que tanto la Potencia Administradora como los propios naturales de Barbada se habían esforzado por reorganizar la estructura política, económica y social del Territorio en preparación para su independencia el 30 de noviembre de 1966. No cabía duda de que la situación política de Barbada había progresado continuamente hacia el logro de los objetivos previstos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

117. La Costa de Marfil era partidaria de la libre determinación de los pueblos y del traspaso progresivo y ordenado de todos los atributos de la soberanía a los verdaderos representantes de los países que aún se encontraban bajo la dominación extranjera. Al orador le complacía que en el caso de Barbada la Potencia Administradora hubiera respetado esos principios y que el Territorio estuviese por obtener en breve su independencia. Juzgaba, sin embargo, que Barbada era un caso aislado, en vista de su situación económica favorable en comparación con la de los demás territorios del Reino Unido en la región. Añadió que esperaba que el proceso de descolo-

nización cobrara fuerza y se aplicara sin excepción a todas las islas del Reino Unido en la región del Caribe.

118. La delegación de la Costa de Marfil estaba a favor de la democratización de los órganos legislativos y ejecutivos de todos esos territorios, a fin de que los habitantes pudieran escoger libremente su condición política y decidir qué clase de relaciones deseaban tener con la Potencia Administradora. También era preciso que se les diera la posibilidad de optar entre el gobierno propio y alguna forma de asociación con otros territorios de la región, ya que entre las islas mencionadas existían indudablemente vínculos que favorecían el establecimiento de un Estado viable. Sin embargo, no se habían adoptado medidas para lograr ese objetivo.

119. El orador compartía la opinión de los representantes que estimaban que una asociación con las islas vecinas se ajustaría a los deseos de desarrollo político libremente expresados por los habitantes y ofrecería la perspectiva más favorable para la región.

120. Para terminar, la delegación de la Costa de Marfil quería felicitar sinceramente a la Potencia Administradora y a Barbada con motivo del feliz resultado de las negociaciones que darían por resultado la pronta independencia del Territorio.

b) *Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas*

121. El representante del Reino Unido declaró que Montserrat era la más pequeña de las Islas Británicas del Caribe oriental, con una extensión de 83 kilómetros cuadrados (32,5 millas cuadradas) y una población de unos 13.500 habitantes. Con arreglo a la Constitución de 1959 se había instituido un sistema de gobierno ministerial y existía un Consejo Ejecutivo integrado por el Administrador, el Ministro Principal, dos Ministros designados entre los miembros elegidos del Consejo, un miembro designado y dos miembros natos. El Consejo Legislativo estaba compuesto de siete miembros electivos, dos miembros natos y un miembro designado. Los dos partidos políticos principales son el Montserrat Labour Party y el United Workers' Movement.

122. La economía del Territorio era predominantemente agrícola; la principal cosecha era el algodón del tipo *sea island*. También se recogía una pequeña cosecha de caña de azúcar y había una creciente industria turística. Durante los dos últimos años la ayuda económica del Gobierno del Reino Unido al Territorio se había acercado a 1.600.000 dólares.

123. Las Islas Vírgenes Británicas eran también un pequeño territorio, con una superficie de unos 153 kilómetros cuadrados (59 millas cuadradas) y constaban de unas 40 islas, 11 de las cuales estaban habitadas. Tenían una población de 8.500 habitantes aproximadamente. El Territorio, que se hallaba bajo el control del Reino Unido desde 1672, tenía desde 1773 un gobierno constitucional formado por una Cámara de la Asamblea cuyos miembros eran todos elegidos, y un Consejo Legislativo, parte de cuyos miembros son elegidos. La actual Constitución preveía un Consejo Ejecutivo y un Consejo Legislativo.

124. En 1947 la población de las Islas Vírgenes había manifestado claramente que no deseaba formar parte de la propuesta federación de las Islas Windward y Leeward. Montserrat, en cambio, había sido miembro de la Federación durante toda la vigencia de ésta y, después de la disolución de la Federación en mayo de 1962, los representantes del Gobierno de Montserrat habían participado en unas discusiones sobre la posibilidad de constituir una nueva federación entre las islas que habían pertenecido a la Federación anterior sin haber optado ulteriormente por la independencia separada. Esas discusiones habían llegado a su punto crítico en abril de 1965 cuando, en una reunión de representantes territoriales celebrada para estudiar la posición más reciente acerca de la posibilidad de la federación, el Ministro Principal de Antigua anunció que su Gobierno se proponía no seguir tomando parte en las deliberaciones. En tales circunstancias, Barbada decidió también examinar de nuevo su posición y en definitiva optó por la independencia separada. Tanto los Territorios como el Gobierno del Reino Unido estaban generalmente de acuerdo en que la mejor

esperanza para el porvenir de los territorios residía todavía en alguna forma de asociación o de federación, pero de momento no había perspectivas de lograr suficiente acuerdo sobre esa cuestión. Por eso el Gobierno del Reino Unido había decidido examinar la posibilidad de elaborar nuevas disposiciones constitucionales para cada uno de los territorios. Ya se habían hecho propuestas a los seis Territorios, o sea, Antigua, San Cristóbal, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente. Los cambios constitucionales para el territorio de Montserrat, que era mucho más pequeño que los demás, serían discutidos con el Gobierno de Montserrat en una fecha ulterior.

125. El 31 de marzo de 1966 se habían celebrado elecciones generales en Montserrat en las cuales obtuvo nuevamente el poder el Labour Party con una mayoría invariable. La cuestión del progreso constitucional no había sido tema de discusión en las elecciones, y los manifiestos del partido se habían concentrado en medidas de desarrollo económico y social.

126. Los progresos realizados por las Islas Vírgenes Británicas habían sido totalmente distintos de la evolución en otras islas del Caribe oriental. En materia constitucional el principal acontecimiento había sido el nombramiento, efectuado el día 1° de enero de 1965 por el Secretario de Estado del Reino Unido para las Colonias, de un Comisionado Constitucional con la misión de recomendar los cambios constitucionales que se juzgasen adecuados, incluso en el sistema electoral, teniendo en cuenta la opinión local y los limitados recursos y población del Territorio. El cargo de Comisionado recayó en la Sra. Mary Proudfoot, miembro del Somerville College, Oxford, quien visitó el Territorio a principios de 1965 y presentó su informe en abril de 1965. En este informe, resumido en un documento de trabajo de la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 33 a 35) se criticaban ciertos aspectos de las actuales disposiciones constitucionales del Territorio, si bien la Sra. Proudfoot concluía que el sistema de nombramiento de miembros funcionaba bien. La principal crítica formulada había sido la de que los contactos entre la opinión pública y los Consejos Legislativo y Ejecutivo eran insuficientes. Por tanto, el objeto de las recomendaciones del Comisionado había sido en parte mejorar las relaciones entre el Gobierno y el pueblo. En consecuencia, en el informe se había recomendado que se mantuviera sin alteración la actual base del sufragio universal de adultos; que se elevara de 6 a 7 el número de distritos electorales; que se creara una comisión de límites para examinar los distritos de la Isla Tórtola; que el Consejo Legislativo comprendiera dos miembros natos, un miembro designado seleccionado tras consultas con el Primer Ministro, y los siete miembros elegidos, con un Presidente elegido de entre los que no eran miembros del Consejo; y que el Consejo Ejecutivo constara de dos miembros funcionarios y de tres de los siete miembros elegidos a los que se denominaría Ministros y serían responsables de los sectores del Gobierno no reservados al Administrador. Conforme a las propuestas de la Sra. Proudfoot, los siete miembros elegidos elegirían a su vez de entre ellos un "Primer Ministro". Entonces el Primer Ministro formaría un Grupo Ministerial, seleccionando a los otros dos Ministros. Los Ministros serían responsables ante el Consejo Legislativo y presentarían su dimisión si el Consejo votara por retirarles la confianza. Las responsabilidades especiales del administrador serían las relaciones exteriores, defensa, seguridad interna, administración pública, finanzas, planificación económica, y ciertos asuntos jurídicos y judiciales.

127. El informe, presentado al Consejo Legislativo en julio de 1965, había sido examinado en octubre de 1965. El Consejo había aprobado una resolución en la que tomaba nota del informe y había pedido al Secretario de Estado para las Colonias que recibiera a una delegación del Consejo con objeto de redactar una nueva constitución para el Territorio a base del informe. Ulteriormente, el Secretario del Reino Unido había propuesto que se celebrara una conferencia constitucional en octubre de 1966, en Londres, y el Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas había aceptado tal sugerencia. En tal conferencia habían de discutirse sin duda plenamente el informe de la señora Proudfoot y las modificaciones propuestas en los debates del Consejo Legislativo.

128. Añadió que la economía de las Islas Vírgenes Británicas se basaba en la ganadería y en la pesca. La reciente y rápida expansión económica de las vecinas Islas Vírgenes de los Estados Unidos había afectado un tanto a la economía, principalmente tendiendo a provocar la emigración de la mano de obra especializada. Un estudio económico publicado en 1962 había recomendado la concentración en el desarrollo del turismo y las mejoras en las comunicaciones. En 1965, las subvenciones y asistencia técnica del Reino Unido al Territorio alcanzaron la suma de 1.170.000 dólares, en comparación con 454.000 dólares en 1964. Para el período 1965-1968 el Gobierno del Reino Unido había hecho una asignación de fondos procedentes del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial de más de un millón de dólares y esos fondos se estaban aplicando a varias obras de desarrollo. Además, recientemente se había aprobado en principio una importante ampliación de un plan de obras en materia de energía eléctrica que se financiaría gracias a un empréstito de un millón de dólares de los Estados Unidos.

129. El representante de Bulgaria declaró que, aunque las Islas Vírgenes Británicas se encontraban en situación muy parecida a la de los demás Territorios Británicos del Caribe, el ritmo de la evolución constitucional había sido mucho más lento en ellas que en otros lugares. La historia del Territorio, desde que se convirtiera en posesión británica en 1672, se dividía en dos fases principales: el período anterior y el período posterior a la emancipación de los esclavos en 1874. Como había señalado el Comisionado Constitucional que visitó el Territorio en 1965, el sistema limitado de representación establecido por la Constitución de 1773 no había seguido evolucionando después de que se marcharon las clases dirigentes blancas a raíz de la emancipación; de hecho, las facultades de gobierno continuaban, en gran parte, en manos del Administrador, quien presidía el Consejo Ejecutivo y el Legislativo. En el informe del Comisionado Constitucional se describía el descontento de la población del Territorio con el actual sistema constitucional; quizás fuera significativo que hasta la fecha no se hubiera señalado ese descontento a la atención del Comité Especial. El Comisionado había formulado recomendaciones que, si se aceptaran, pondrían fin a una situación en la que la administración tenía tan poca relación con la población que se consideraba al Consejo Ejecutivo y al Legislativo como meros instrumentos del Gobierno e incluso como activamente antagónicos a los intereses del pueblo. Sin embargo, la situación económica y financiera del Territorio era análoga a la de otros territorios del Caribe pues no podía equilibrar su presupuesto sin el aporte de importantes subsidios del Reino Unido; por lo tanto, el Comisionado había recomendado que el control financiero siguiera siendo responsabilidad del Administrador hasta que la colonia llegara a ser solvente. Dado que la Potencia Administradora no había aprobado todavía ninguna de estas razonables recomendaciones, la delegación de Bulgaria consideraba que seguía siendo aplicable la petición hecha por el Comité Especial al Reino Unido para que éste adoptara medidas que aceleraran la evolución constitucional dentro del marco de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

130. El representante de la Costa de Marfil observó que su delegación estaba convencida de que toda la información que sobre las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat había recibido el Subcomité demostraba que su estructura económica era complementaria y las mejores perspectivas de viabilidad económicas eran las que ofrecían algún tipo de asociación que fuese aceptable para sus habitantes. El intento de establecer en 1947 una federación de las Islas Windward y Leeward había fallado, pero la delegación de la Costa de Marfil quería saber si desde entonces había cambiado la opinión pública en todas las Islas, y si no merecería la pena volver a hacer todo lo posible por establecer algún tipo de asociación entre ellas. Cabía lamentar que la región se hubiese fragmentado al obtener su independencia separadamente tantos territorios, y, dado que por lo menos en uno de ellos — las Islas Vírgenes Británicas — existía muy poca relación entre los habitantes y sus representantes en la administración, quizá fuera prudente volver a sondear la opinión pública respecto de la cuestión de la federación.

131. El representante del Irán manifestó que los problemas de las Islas Vírgenes Británicas, territorio de solamente 8.500 habitantes, eran característicos de los territorios pequeños en que se ocupaba el Comité. En tales casos había que tener en cuenta otras soluciones y no sólo la de la independencia por separado para cada territorio. La delegación del Irán deseaba pedir al representante del Reino Unido que se sirviera aclarar varios puntos en relación con la interrupción de las negociaciones sobre la federación en 1947. Por ejemplo, no estaba claro si los delegados que habían asistido a las conversaciones tenían una auténtica conciencia de lo que opinaban los habitantes de los Territorios, ni tampoco si se adoptaron, entonces o más recientemente, medidas para determinar lo que opinaban acerca de su futuro estatuto. Podía ser que los delegados, a falta de un mandato concreto, hubiesen actuado por su propia iniciativa. Y quizás los habitantes de los Territorios desconocían sus derechos, en particular el de la libre determinación, así como las diversas soluciones por las que podrían optar.

132. Añadió que un territorio colonial, aunque disfrutase de cierta medida de gobierno representativo, seguía siendo un territorio colonial y, por lo tanto, no soberano. Bajo el sistema colonial, los deseos de los habitantes podían expresarse de varias maneras. En territorios de mayor dimensión, la población podía formar partidos políticos y otras organizaciones con objeto de expresar su opinión. En los territorios más pequeños, donde esto no resultaba siempre posible, las Naciones Unidas deberían velar por que se brindara a los habitantes la oportunidad de ejercer, con absoluto conocimiento de sus prerrogativas y libertad, su derecho a la libre determinación.

133. Por lo que hacía a las Islas Vírgenes Británicas, la Potencia Administradora debería poner empeño en que se lograra la liquidación del régimen colonial conforme a los deseos del pueblo interesado. El representante del Reino Unido había dicho que en 1947 los habitantes de las Islas Vírgenes habían expresado claramente que no deseaban ingresar en la federación propuesta. Desde entonces habían transcurrido 20 años y era lógico que los miembros preguntaran si se había vuelto a consultar a la población del Territorio. Se habían producido muchos cambios de importancia y debía informarse a los habitantes de los distintos derechos de que podían disfrutar. Al pueblo correspondería decidir su situación, pero las Naciones Unidas deberían encargarse de que su elección se llevara a cabo libremente.

134. El representante del Uruguay dijo que en América Latina el proceso de liberación había sido de índole esencialmente política y los factores económicos no habían tenido un papel muy importante. Sin embargo, en el caso de algunos de los territorios más pequeños en los que se ocupaba el Subcomité, el aspecto económico revestía gran importancia y había que asegurar la viabilidad económica del territorio interesado, a fin de que los habitantes pudieran satisfacer sus necesidades espirituales, culturales y físicas.

135. Añadió que tenía entendido que, cuando el Subcomité examinara la cuestión de Antigua, el representante del Reino Unido explicaría algunos de los motivos por los que los habitantes de dicho Territorio habían rechazado la idea de una federación. A reserva de la información que proporcionara entonces el representante del Reino Unido respecto de la posibilidad de una nueva federación el orador deseaba formular algunos comentarios. Si se determinase que la mayoría de los habitantes de las Islas Leeward y Windward eran partidarios de la federación, el Subcomité lo celebraría. Si, por el contrario, la población rechazara la federación, el Subcomité debería sugerir que se estableciera una asociación flexible. En todo caso, el Subcomité debería informar al Comité Especial que, a su juicio, la mejor solución para el futuro desarrollo de los Territorios interesados sería la constituida por algún tipo de asociación. Si la población seguía deseando la independencia por separado, el Comité Especial tendría que aceptar esa decisión como expresión de la voluntad del pueblo conforme al principio de la libre determinación.

136. El representante del Reino Unido manifestó que en una sesión ulterior daría una relación completa de las nego-

ciaciones sobre la propuesta federación entre las Islas Leeward y Windward, cuando hiciera su declaración sobre dichos Territorios en otra sesión. En vista de que varios miembros habían aludido a la necesidad de consultar a la población sobre las cuestiones que afectaban a su futuro estatuto constitucional, quería señalar que en el sistema británico de gobierno representativo no existía ninguna disposición para consultar directamente al pueblo sobre cuestiones concretas mediante referéndum o medios de ese tipo. En virtud de dicho sistema, la consulta era un proceso continuo que funcionaba a través de la elección de candidatos al Parlamento en representación de partidos políticos, el debate parlamentario, los medios de información y, en el caso de estos Territorios, el contacto, por conducto del Gobernador o Administrador, con el Gobierno en Londres. No podía anticiparse a la próxima conferencia comentando las recomendaciones del Comisionado Constitucional, pero el hecho de que el Gobierno del Reino Unido hubiese invitado a representantes de las Islas Vírgenes Británicas a una conferencia era indicio de su deseo de estudiar un cambio constitucional.

137. Añadió que oportunamente su delegación comentaría algunas de las causas que habían contribuido al fracaso de las negociaciones sobre la federación, aunque lo principal era que, por el momento, éstas habían concluido; los historiadores determinarían las causas. Una gran mayoría de los interesados había querido, evidentemente, llegar a un acuerdo sobre la federación, pero ello había sido imposible. Por lo tanto, habían decidido continuar el desarrollo por separado de los Territorios, sin perjuicio de la posibilidad de establecer una nueva federación.

138. Por lo que hacía a las Islas Vírgenes Británicas, los habitantes del Territorio no habían expresado interés alguno en ingresar en una federación con las Islas Leeward y Windward. Se había pensado en la posibilidad de una integración con las vecinas Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y, a ese respecto, el Gobierno del Reino Unido se guiaría por los deseos de los interesados. En la próxima Conferencia Constitucional que tendría lugar en Londres se estudiaría el porvenir inmediato del Territorio.

c) Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente

139. El representante del Reino Unido recordó que el 29 de abril de 1964 su delegación había formulado una declaración introductoria completa sobre Barbada y sobre las Islas Windward y Leeward (A/AC.109/102), además de esbozar la historia de la Federación de las Indias Occidentales desde su creación en 1958 hasta su disolución en mayo de 1962; más adelante había expuesto los continuos esfuerzos realizados para formar una nueva federación con los restantes territorios después que Jamaica y Trinidad optaron por independizarse separadamente.

140. La delegación del Reino Unido había mantenido informado al Comité Especial acerca de los progresos logrados en la búsqueda de una fórmula que permitiera a los territorios reunirse de nuevo en una nueva agrupación, pues hacía tiempo que el Gobierno del Reino Unido estaba convencido de que esas pequeñas islas tenían escasas posibilidades de conseguir autarquía económica o categoría internacional como Estados separados y, por otra parte, no podían seguir siendo, indefinidamente, colonias del Reino Unido. A lo largo de los debates celebrados para examinar la posibilidad de establecer una federación entre los territorios de Barbada, Antigua, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y Montserrat, el Reino Unido había puesto en claro que, a su juicio, el mejor camino para ellos consistía en alguna forma de cooperación regional que pareciese ofrecer las mejores perspectivas para su futuro desarrollo político y económico. También se había aclarado desde el principio que el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a entablar conversaciones acerca de la concesión de la independencia a una federación de dichos territorios una vez que hubiera quedado establecida.

141. En mayo de 1962, una conferencia celebrada en Londres había llegado a un acuerdo provisional sobre una cons-

titudin federal. En cada una de las asambleas legislativas de los ocho Territorios participantes, con excepción del de Granada, las propuestas convenidas en Londres habían sido aprobadas como base para ulteriores discusiones. Sin embargo, el Gobierno de Granada, que había entrado en funciones en septiembre de 1962, había declarado su intención de asociarse con Trinidad y Tabago en un Estado unitario. En diciembre de 1962, el Secretario para las Colonias había discutido el asunto en Barbada con los Ministros de los otros siete Territorios, y se había hecho pública una declaración conjunta en la que los Ministros habían reafirmado su convicción de que lo que mejores perspectivas ofrecía para el porvenir de sus Territorios era la federación.

142. En mayo de 1963, los Ministros de los siete Territorios habían celebrado conversaciones en Barbada con un Ministro del Reino Unido para examinar los preparativos de una futura conferencia que había de celebrarse en Londres durante el mes de junio. Las conversaciones habían revelado importantes divergencias de opinión entre los representantes de los siete Territorios, y se había decidido aplazar la proyectada conferencia. Durante el año y medio siguiente habían continuado las discusiones locales y, en diciembre de 1964, los Ministros de los siete Territorios habían aprobado un nuevo proyecto de constitución federal, sujeto a varias reservas. Las reservas expuestas por varios Territorios habían demostrado que aún existía un grave desacuerdo sobre algunas cuestiones fundamentales y, en particular, sobre las facultades que debería tener la autoridad central. Algunos gobiernos se habían manifestado en favor de una autoridad central fuerte; otros habían sido partidarios de un amplio margen de autonomía local. Las cuestiones que mayores diferencias habían suscitado eran la del poder federal en materia fiscal y la de la medida en que la autoridad federal debería establecer departamentos ejecutivos. Uno de los gobiernos no se había mostrado dispuesto a convenir en una unión aduanera entre los Territorios a menos que se facultara a la autoridad federal a implantar un impuesto sobre la renta, mientras que otros gobiernos se habían opuesto a que la autoridad federal tuviera ese poder. También se habían manifestado marcadas diferencias de opinión en lo que respectaba a la división de otras facultades y funciones entre el gobierno federal y los gobiernos locales, de lo cual se desprendería que se carecía de una base firme de acuerdo acerca de los principios en que deberían fundarse las instituciones federales.

143. Después de efectuar una visita a cada uno de los Territorios a principios de 1965, el Secretario para las Colonias había hecho pública la opinión del Gobierno del Reino Unido en un despacho dirigido a los siete Gobiernos. En dicho despacho se ponía en claro que el Gobierno del Reino Unido consideraba todavía que una federación implantada en condiciones satisfactorias era lo que ofrecía mejores perspectivas para la solución de los problemas constitucionales de la zona. Hacía constar asimismo que el Gobierno del Reino Unido no tenía inconvenientes en discutir, una vez que se hubiera convenido en un plan federal, las disposiciones que hubieran de adoptarse para la independencia de la federación.

144. En una reunión posterior de representantes territoriales celebrada en abril de 1965 el Ministro Principal de Antigua había anunciado que su Gobierno tenía intención de no seguir participando en las conversaciones sobre el proyecto de federación. En tales circunstancias el Gobierno de Barbada había pedido que se le concediese tiempo para examinar las consecuencias, y poco después había propuesto que Barbada procediese a independizarse por separado antes de considerar ninguna nueva medida encaminada a la federación. Los miembros del Subcomité recordaban que, finalmente, en la conferencia celebrada en junio y julio del año en curso se había decidido que Barbada alcanzaría la independencia el 30 de noviembre de 1966.

145. El hecho de que no se hubiera podido establecer una nueva federación había sido una grave decepción para el Gobierno del Reino Unido. Desde finales de la segunda guerra mundial, ese Gobierno había prestado su pleno apoyo a los intentos locales de establecer una federación entre los Territorios del Reino Unido en el Caribe para conseguir la independencia en la unidad política, pero tales esfuerzos no habían tenido éxito.

La Federación de las Indias Occidentales sólo había tenido una vida efímera, y se había disuelto en el mismo mes que había sido fijado para su independencia. El Gobierno del Reino Unido había estimulado los esfuerzos de los ocho Territorios restantes por llegar a un acuerdo sobre una nueva federación que pudiera seguir a Jamaica y a Trinidad y Tabago por el camino de la independencia. Sin embargo, esto no había podido ser y Barbada se encaminaba en aquel momento hacia una independencia separada. Aunque seguía estimando que una asociación más estrecha entre los Territorios era lo que ofrecía las perspectivas más alentadoras para su porvenir, el Gobierno del Reino Unido reconocía que la cuestión debería decidirse localmente. Para el otoño de 1965 se había visto ya claramente que era hora de examinar por separado, en cada uno de los Territorios, las necesidades de evolución constitucional correspondientes.

146. Al examinar las disposiciones constitucionales aplicables a los restantes seis Territorios de Antigua, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente, el Gobierno del Reino Unido había tenido en cuenta las graves dificultades económicas con que se enfrentaban las Islas. Se trataba de Territorios donde la tasa de crecimiento de la población se contaba entre las más altas del mundo. No eran ricos en recursos naturales, y dependían en gran medida de sus exportaciones, de tipo principalmente agrícola, para costear sus importaciones.

147. Con la ayuda financiera del Reino Unido, las Islas trataban de diversificar su economía y hacer algún progreso, especialmente mediante el turismo, pero las industrias manufactureras tenían sólo un alcance limitado. Se estaban mejorando los medios de comunicación. En virtud del *Commonwealth Sugar Agreement*, las Islas recibían por su azúcar un precio superior al del mercado mundial y se beneficiaban del acceso al mercado del Reino Unido para todas sus exportaciones, más de la mitad de las cuales se destinaban al Reino Unido.

148. Además de esas formas indirectas de ayuda, había sido también decisiva la ayuda directa del Reino Unido. En los últimos diez años, los Territorios habían recibido más de 28 millones de dólares de los EE. UU. en subvenciones del Commonwealth para el bienestar y el desarrollo. En el actual trienio (1965-1968), se había asignado a los Territorios la suma de 13.580.000 dólares, lo cual representaba un aumento muy considerable sobre la ayuda para el desarrollo que se les había prestado hasta la fecha. Varios de los Territorios no podían equilibrar su presupuesto y recibían subvenciones anuales para gastos presupuestarios: en 1966, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Dominica, San Vicente y Granada recibirían unos 3.650.000 dólares por este concepto. Se había prestado asimismo asistencia financiera a varios proyectos que redundaban considerablemente en beneficio de los Territorios, como, por ejemplo, la Universidad de las Indias Occidentales.

149. Además, el Gobierno del Reino Unido había establecido una División de Desarrollo del Caribe destinada a prestar ayuda a los gobiernos para que aprovecharan lo mejor posible los fondos de desarrollo de que disponían. Al mismo tiempo, los Gobiernos del Reino Unido, el Canadá y los Estados Unidos habían organizado en el año actual un gran estudio económico de los Territorios del Reino Unido en el Caribe con objeto de examinar sus problemas de desarrollo a escala regional. En el informe sobre el estudio se encontraban propuestas ingeniosas para coordinar y acelerar el desarrollo de los Territorios. Los tres Gobiernos habían indicado a las Islas que estaban dispuestos a discutir el informe con ellos tan pronto como hubiesen podido estudiarlo.

150. Añadió, volviendo a la cuestión del futuro constitucional de las Islas a raíz de los esfuerzos por formar una nueva federación, que algunos de los gobiernos de las Islas habían pedido que se ampliara su control sobre sus asuntos internos, aunque ninguno de ellos había propuesto la independencia separada. Los Territorios tenían con el Reino Unido vínculos culturales y sentimentales muy antiguos, y deseaban conservarlos. El Gobierno del Reino Unido reconocía que para atender las solicitudes de mayor progreso constitucional no bastaba con hacer entrega de nuevas facultades a los gobiernos locales en un contexto colonial, y había resuelto idear una nueva relación que

fuese compatible con la madurez política de los Territorios, pero que, al mismo tiempo, les permitiera mantener con el Reino Unido los vínculos que desearan conservar.

151. En consecuencia, en el otoño de 1965, el Gobierno del Reino Unido había enviado a los Gobiernos de Antigua, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Granada, nuevas propuestas generales que se exponían con cierto detalle en un documento de trabajo de la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 44 a 54). El Gobierno del Reino Unido había propuesto que cada Territorio se convirtiera en un Estado asociado con el Reino Unido, con control sobre sus asuntos internos y con derecho a enmendar su propia constitución, incluida la facultad de poner término a la asociación con el Reino Unido y declararse independiente. Estas propuestas habían indicado que el Reino Unido estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de la defensa y de los asuntos externos de los Estados mientras existiera la asociación. Una característica notable era la introducción, en las constituciones de los Estados, de salvaguardas para preservar las formas democráticas de gobierno, la protección de los derechos humanos fundamentales y el mantenimiento de las propias constituciones. También se había propuesto la creación de un Tribunal Supremo regional para los seis Estados. Se había aclarado que los Estados podrían continuar recibiendo ayuda en virtud del programa de ayuda del Gobierno del Reino Unido.

152. En noviembre de 1965, un representante especial del Secretario de Estado había visitado los Territorios para discutir con los gobiernos las propuestas mencionadas, que habían sido aceptadas como base para las negociaciones. Todas las disposiciones se habían tomado en consulta con los gobiernos de los Territorios interesados. Las propuestas del Gobierno del Reino Unido, modificadas para tener en cuenta las opiniones expuestas ante el representante especial, habían sido hechas públicas en diciembre de 1965, y el Reino Unido había propuesto que en la primavera de 1966 se celebrasen en Londres discusiones con los gobiernos territoriales y representantes de los partidos de oposición de cada asamblea legislativa. Todos los gobiernos territoriales, al igual que los representantes de los partidos de oposición, habían aceptado participar en la serie de conferencias. El Gobierno del Reino Unido había invitado a los gobiernos territoriales a preparar propuestas detalladas para las nuevas constituciones internas a fin de plantearlas en la conferencia.

153. En la primera Conferencia, celebrada con Antigua entre el 26 de febrero y el 26 de marzo de 1966, se había convenido en que, si bien el Gobierno del Reino Unido tendría la responsabilidad última de la defensa y de las relaciones exteriores, procedería en todo ello en consulta con el Gobierno de Antigua, y que si, tras celebrar consultas, no se pudiese llegar a un acuerdo en un asunto que exigiese legislación, el Gobierno del Reino Unido, antes de seguir adelante, daría al de Antigua, en la medida posible, ocasión de examinar si deseaba adoptar medidas para poner término a la asociación. El Gobierno del Reino Unido había resuelto asimismo delegar en el Gobierno de Antigua una parte importante de su autoridad en lo referente a las relaciones exteriores de Antigua.

154. En dicha Conferencia se había elaborado también, con bastante detalle, un proyecto de la nueva constitución de Antigua, incluidas disposiciones para su enmienda o sustitución por el Parlamento de Antigua. La constitución sería plenamente democrática, con plenas salvaguardas para los derechos fundamentales: habría un gobernador que, como representante de Su Majestad la Reina, ejercería los poderes de un jefe de Estado constitucional que actuaría con el asesoramiento de sus Ministros; no sería un representante del Gobierno del Reino Unido, ni estaría sujeto a sus instrucciones. La Cámara de Representantes, al igual que el actual Consejo Legislativo, sería elegida por sufragio universal, y la autoridad ejecutiva correspondería a un gabinete bajo un Primer Ministro que contase con mayoría en la Cámara. Habría un senado, con limitadas facultades dilatorias, siete de cuyos miembros serían nombrados por consejo del Primer Ministro, y los tres restantes nombrados después de consultar con el Primer Ministro. Habría las salvaguardas habituales para preservar la independencia del poder judicial. Estas y otras cláusulas importantes quedarían sólida-

mente establecidas en la constitución; todo proyecto de ley en camino a enmendar la constitución exigiría el apoyo de una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras legislativas y la aprobación subsiguiente por una mayoría de dos tercios en un referéndum. En caso de que se llegara a un punto muerto entre el Senado y la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de enmienda de la constitución que hubiera sido rechazado por el Senado en dos períodos de sesiones sucesivos podría someterse a referéndum.

155. Antigua estaría en libertad para poner término en cualquier momento a su asociación con el Reino Unido mediante el mismo procedimiento requerido para enmendar las cláusulas más sólidamente establecidas en su constitución. No se exigiría referéndum para poner en práctica las disposiciones constitucionales por las que Antigua podría unirse — separadamente o junto con otros territorios — con un país independiente del Commonwealth en el Caribe ya formando un Estado unitario, una federación o cualquier otra forma de asociación constitucional en virtud de la cual el país independiente fuese responsable de la defensa y de las relaciones exteriores de Antigua.

156. La Conferencia había convenido en principio en que habría un Tribunal Supremo de ámbito regional. A reserva de la anuencia de los demás Territorios que serían atendidos por el Tribunal, la Conferencia había convenido en que éste debería consistir en un Tribunal Supremo de Justicia y un Tribunal de Apelación. También se había llegado a un acuerdo acerca de la constitución del Tribunal y su jurisdicción en cuestiones constitucionales y en cuestiones de derechos y libertades fundamentales. Una cuestión importante que todavía quedaba por resolver era la de las disposiciones prácticas para establecer el Tribunal — entre ellas, la elección de la sede y la distribución de los costos — que no era oportuno examinar en la Conferencia. Se pensaba examinar estas cuestiones más adelante, en una conferencia intergubernamental que se había de celebrar en breve en el Caribe.

157. La segunda Conferencia, celebrada con representantes de los cuatro Territorios de las Islas Windward (Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente), había durado del 18 de abril al 6 de mayo. En la sesión inaugural, los delegados de las Islas Windward habían expresado la opinión de que las propuestas constitucionales del Gobierno del Reino Unido debieron haberse acompañado de propuestas tendientes a una relación económica más estrecha entre el Reino Unido y los Territorios, lo cual contribuiría a elevar el nivel de vida de sus pueblos. Ninguna persona que hubiese estudiado las dificultades económicas de las Islas podía dejar de simpatizar con tales deseos, pero la delegación del Reino Unido se había visto obligada a informar a los representantes que esos problemas rebasaban el alcance de la Conferencia; sus miembros habían señalado que, desde hacía muchos años, el Gobierno del Reino Unido hacía cuanto estaba a su alcance por promover el desarrollo económico de los Territorios, no sólo con la ayuda directa sino proporcionando a los productos de exportación de las Islas acceso directo, en condiciones favorables al mercado del Reino Unido. También habían dicho que, en vista de sus muchas obligaciones, el Gobierno del Reino Unido no podía prever ningún aumento en la ayuda a los Territorios que excediese los créditos ya asignados, pero habían hecho notar la reciente creación de la División de Desarrollo del Caribe, que seguramente contribuiría al aprovechamiento óptimo de dicha ayuda. Habían añadido que los cambios constitucionales no alterarían por sí solos las disposiciones vigentes sobre comercio, pero que el Gobierno del Reino Unido no podía ofrecer a los habitantes de esos países condiciones que resultasen especialmente favorables al comparárlas con las que se aplicaban en el Reino Unido a otros inmigrantes procedentes del Commonwealth.

158. Después de discutida la cuestión a fondo, los delegados de las Islas Windward habían aceptado esa actitud. Aunque en la Conferencia se habían discutido en sesión plenaria los asuntos que interesaban a los cuatro Territorios, también se habían celebrado discusiones separadas con cada una de las delegaciones sobre las disposiciones concernientes a las Islas respectivas. Las disposiciones en que se había convenido no eran idénticas respecto a los asuntos exteriores y la defensa ni res-

pecto a la constitución interna, pero las diferencias tenían poca importancia y se debían a circunstancias y preferencias locales.

159. En lo esencial, las disposiciones elaboradas anteriormente para Antigua se habían seguido de cerca, pero con una excepción importante. Varias de las delegaciones de las Islas Windward habían insistido en que se les asegurase que no se ejercería arbitrariamente el poder que tenía el Reino Unido de dar por terminada la asociación en forma unilateral. Se les había dado una garantía — que también se aplicaría a Antigua y San Cristóbal-Nieves-Anguila — de que el Reino Unido no daría por terminada la asociación sin notificar seis meses antes su intención de hacerlo, y de que en tales circunstancias el Reino Unido estaría dispuesto a celebrar con el Territorio interesado una conferencia en la que se discutirían las repercusiones políticas y económicas de la terminación. También se les había asegurado que en tales circunstancias se pediría la aprobación concreta del Parlamento del Reino Unido respecto a la terminación de la asociación.

160. Las propuestas tendientes a crear un tribunal supremo regional, aceptadas en la Conferencia celebrada con Antigua, habían sido consideradas por los cuatro Territorios en la celebrada con los de las Islas Windward. Los Territorios habían convenido en unas propuestas que serían aceptables para ellos si también las aceptaban los otros dos Territorios interesados. Dichas propuestas no eran fundamentalmente distintas de las aceptadas por Antigua. La Conferencia había convenido en que quedaban pendientes unas cuestiones de índole administrativa respecto a las cuales no era procedente que la propia Conferencia adoptase una decisión y que debían aplazarse para una discusión intergubernamental subsiguiente.

161. La tercera Conferencia se había celebrado entre el 12 y el 26 de mayo, con representantes de San Cristóbal-Nieves-Anguila. Al igual que las delegaciones de las Islas Windward, la delegación de San Cristóbal-Nieves-Anguila había subrayado los problemas económicos del Territorio. El Gobierno del Reino Unido había podido formular algunas sugerencias acerca de diversos estudios de viabilidad en relación con las cuestiones suscitadas y — a reserva de las conclusiones de tales estudios — de la asistencia financiera que se necesitaría.

162. Se había llegado a un acuerdo completo sobre las disposiciones propuestas para los asuntos exteriores y la defensa, la constitución interna y la terminación de la asociación. En lo tocante a la ayuda para el desarrollo, el Gobierno del Reino Unido había explicado que, por sí mismas, las nuevas disposiciones no afectarían a su actitud, y se había comprometido a someter a nuevo examen una propuesta sobre la administración de la ayuda presupuestaria presentada por el Gobierno de San Cristóbal-Nieves-Anguila. Las conversaciones sobre esa propuesta no se habían terminado aún.

163. Las disposiciones sobre un Tribunal Supremo regional, declaradas aceptables en las dos conferencias anteriores, habían sido examinadas por la Conferencia de San Cristóbal-Nieves-Anguila, y fueron declaradas aceptables con sujeción al examen de algunos cambios adicionales. La Conferencia había convenido en que se debían discutir en una conferencia intergubernamental subsiguiente las disposiciones de orden práctico para el establecimiento del Tribunal.

164. Las disposiciones en que se había convenido en las tres Conferencias habían sido luego sometidas a la aprobación de las cámaras legislativas correspondientes. Hasta la fecha, los órganos legislativos de Antigua, Dominica, Santa Lucía y Granada habían terminado su examen de las propuestas y las habían aprobado mediante resoluciones. Todavía no se habían fijado las fechas para el examen correspondiente en San Cristóbal-Nieves-Anguila, donde se habían celebrado elecciones generales el 25 de julio, ni en San Vicente, donde se las había efectuado el 22 de agosto.

165. Añadió que se necesitaría una ley del Parlamento del Reino Unido para disponer la nueva relación propia de la asociación. La elaboración detallada de la constitución de cada uno de los Territorios conforme a las disposiciones convenidas con ellos — y la solución de los problemas detallados de las cons-

tituciones en consulta con cada Territorio — era una tarea considerable que requeriría algunos meses.

166. El acuerdo logrado sobre un tribunal supremo regional en las primeras conferencias había sido sometido a la necesaria revisión a la luz de las conclusiones alcanzadas en cualquiera de las conferencias posteriores de la serie de tres. Se habían formulado propuestas para celebrar en septiembre una conferencia regional del Caribe en la cual se conciliarían las divergencias resultantes de ese procedimiento y se lograría un acuerdo sobre otras cuestiones conexas que no se habían podido discutir en las conferencias separadas. Se esperaba que en esa conferencia sería posible convenir en el proyecto de legislación para el establecimiento del Tribunal.

167. Se había elaborado un programa detallado que abarcaba todos estos procesos. Con sujeción a la aprobación por los órganos legislativos que todavía no habían examinado las propuestas aprobadas en las conferencias, y a la promulgación de las leyes necesarias en el Reino Unido, se tenía la intención de poner en efecto las nuevas disposiciones a principios de 1967.

168. Era evidente que los procesos complejos y exhaustivos de la formulación de nuevas disposiciones para cada uno de los seis Territorios se habían adelantado, y seguían adelantándose, en forma optimista y constructiva. Lo esencial de dichos procesos estribaba en las consultas estrechas y continuas en cada etapa entre el Gobierno del Reino Unido, por una parte, y los Gobiernos líderes políticos de las Islas, incluso los de la oposición, por otra; muchas de las propuestas fundamentales se habían originado en los propios Territorios y muchas otras, al menos en su forma inicial, en Londres. Este proceso no había terminado aún. Además, había muchas otras estipulaciones detalladas — por ejemplo, la relativa a la futura constitución interna de cada Territorio — que el orador no trataría de exponer cabalmente pero que el Subcomité descarta sin duda estudiar. Por ello la delegación del Reino Unido haría distribuir entre los miembros del Subcomité los informes pertinentes sobre las conferencias, en los cuales figuraban detalles completos acerca de esos puntos, así como como una relación más circunstanciada de las cuestiones que había tratado el orador.

169. Por tanto, añadió, su declaración constituía en efecto un informe sobre los progresos realizados. No había duda de que el Subcomité convendría en que hasta el momento se había logrado un progreso verdadero y fundamental. Quedaba mucho por hacer y, desde luego, sería prematuro todo juicio o conclusión final sobre el resultado que se conseguiría en definitiva; sólo se podrían examinar las nuevas disposiciones en forma global y coherente, habida cuenta de los antecedentes históricos y económicos de la región, cuando hubieran adelantado considerablemente los procesos en curso.

B. Aprobación del informe

170. El Subcomité examinó sus conclusiones y recomendaciones sobre estos Territorios (véase párr. 177 *infra*) en sus sesiones 57a. a 59a., celebradas entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre de 1966.

171. Las conclusiones y recomendaciones generales del Subcomité, y las relativas a Barbada y Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente, fueron aprobadas por consenso.

172. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes Británicas, los incisos 7) a 11) y 14) también se aprobaron por consenso, en tanto que los incisos 12) y 13) se aprobaron por votación, de la manera siguiente:

a) En el inciso 12), la tercera frase se sometió a votación separada a solicitud del representante de Bulgaria. La frase se aprobó por 6 votos contra 1. El inciso en su conjunto se aprobó por 6 votos contra ninguno y 1 abstención.

b) En el inciso 13), el representante de Bulgaria propuso que se suprimiera la segunda frase. La propuesta fue rechazada por 4 votos contra 2 y 1 abstención. El inciso en su conjunto fue aprobado por 5 votos contra 1 y 1 abstención.

173. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes Británicas, el representante de Bulgaria expresó reservas en cuanto a las palabras "a pesar de ciertos progresos en materia constitucional" en el inciso 10) y a las palabras "con plena libertad y con total conocimiento de las posibles opciones" en la primera frase del inciso 13).

174. El representante de Bulgaria dijo que su delegación había accedido a que se aprobase por consenso el proyecto de conclusiones y recomendaciones en vista de que el tiempo apremiaba y era esencial que el Subcomité presentase un informe al Comité Especial. La posición de su delegación era que el Comité Especial debía reafirmar que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplicaba plenamente a los Territorios y que la Potencia Administradora debía aplicar dicha Declaración. Estaba firmemente convencida de que era necesario que se envíasen a los Territorios misiones visitadoras para que el Comité Especial pudiera desempeñar su tarea. Como las conclusiones y recomendaciones que se acababan de aprobar concordaban con esa posición, su delegación no había tenido inconveniente en aceptarlas.

175. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones relativas a Barbada, su delegación reservaba su posición sobre el fracaso de las negociaciones para la federación, pues consideraba que ese fracaso se debía en gran parte a la falta de cooperación de la Potencia Administradora. El procedimiento adoptado por la Potencia Administradora para conceder la independencia no era satisfactorio y la delegación de Bulgaria tenía reservas en cuanto a la manera como la Potencia Administradora creía cumplir las obligaciones que le imponía la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Lamentaba que el Subcomité no hubiera podido lograr acuerdo para incluir una referencia al hecho de que la Potencia Administradora no hubiera dado oportunidad al Comité Especial de enviar una misión visitadora a Barbada. Una misión visitadora podría haber aconsejado al Comité Especial sobre la aplicación de la resolución 1514 (XV).

176. En cuanto a la última sección de las conclusiones y recomendaciones, lamentaba que el Subcomité no hubiera tenido tiempo de estudiar esos Territorios con el detenimiento necesario. En lo futuro debería evitarse semejante situación.

C. Conclusiones y recomendaciones

177. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las siguientes conclusiones y recomendaciones:

a) De orden general

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones relativas a estos Territorios que aprobó en 1964, y que la Asamblea General hizo suyas en su vigésimo período de sesiones.

2) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos Territorios. Al mismo tiempo, reconoce que el pequeño tamaño y la escasa población de estos Territorios y el carácter de su economía presentan problemas peculiares que requieren especial atención.

3) El Comité Especial reafirma que incumbe a los pueblos de los Territorios, y solamente a ellos, expresar libremente su parecer sobre el estatuto político y desean adoptar a fin de realizar los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

4) El Comité Especial reafirma el derecho de los pueblos de esos Territorios a ejercer su derecho a la libre determinación con libertad absoluta y con pleno conocimiento de las diversas formas de estatuto político que se ofrecen a su elección. Asimismo, expresa su creencia de que las Naciones Unidas, particularmente en el caso de los Territorios pequeños, deberían adoptar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de dichos Territorios pudieran expresar libremente su parecer sobre su estatuto futuro, con pleno conocimiento de las posibilidades que se les brindan.

5) El Comité Especial reitera sus recomendaciones anteriores sobre la necesidad de enviar misiones visitadoras a esos Territorios y, con tal fin, insta a la Potencia Administradora a que haga posible el envío de misiones visitadoras a esos Territorios por el Comité Especial.

6) El Comité Especial recuerda su convicción, expresada en 1964, según la cual debería ser posible que esos Territorios se unieran con otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. También recuerda que, en aquel momento, se estaban llevando a cabo negociaciones entre casi todos esos Territorios con el propósito de establecer una federación. El Comité Especial deplora que esas negociaciones no hayan tenido éxito y que, en consecuencia, cada Territorio se haya visto obligado a buscar una solución por separado. Expresa la esperanza de que la Potencia Administradora hará cuanto esté a su alcance para facilitar el tipo de solución que desee el pueblo.

b) Islas Vírgenes Británicas

7) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones que sobre el Territorio aprobó en 1964 y que fueron ratificadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

8) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales tiene plena aplicación al Territorio.

9) Toma nota de que un Comisionado Constitucional visitó el Territorio en 1965 y que, a base de su informe, se celebrará una Conferencia Constitucional en octubre de 1966. Toma nota también con preocupación de las observaciones del Comisionado Constitucional acerca del descontento que reina en el Territorio, una de cuyas principales razones consiste en que el Gobierno se mantiene apartado del pueblo. El Comité Especial confía en que la Potencia Administradora adoptará urgentes medidas para remediar la situación.

10) El Comité Especial lamenta que a pesar de ciertos progresos en materia constitucional, la Potencia Administradora no haya dado cumplimiento todavía a la Declaración en el Territorio y la insta a que lo haga sin demora.

11) Reafirma el derecho del pueblo a ejercer su derecho de libre determinación con completa libertad.

12) El Comité Especial reitera el criterio que expresó en 1964 en el sentido de que debe ser posible que el Territorio se una a otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. Deplora que desde 1947 no se hayan tomado medidas efectivas para consultar al pueblo sobre una posible federación con otros Territorios. Por consiguiente, invita a la Potencia Administradora a que adopte las medidas del caso para que la población del Territorio se percate plenamente de las diversas posibilidades que se le ofrecen, sin excluir las posibilidades enunciadas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, en la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El Comité Especial invita asimismo a la Potencia Administradora a que se asegure de que el pueblo del Territorio pueda expresar, con completa libertad y sin restricción alguna, sus deseos en cuanto a la situación política futura del Territorio.

13) Reitera su convencimiento de que las Naciones Unidas deben asegurarse de que el ejercicio del derecho de libre determinación en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General se practica con plena libertad y con total conocimiento de las posibles opciones. Considera, por lo tanto, que en el procedimiento relativo al ejercicio del derecho de libre determinación será esencial una presencia de las Naciones Unidas.

14) El Comité Especial lamenta que la Potencia Administradora no haya aceptado el envío de una misión visitadora del Comité Especial al Territorio, y afirma que una visita a él es tanto útil como necesaria. Por lo tanto, pide la cooperación de la Potencia Administradora para que las Naciones Unidas puedan enviar una misión visitadora al Territorio con objeto de recabar información de primera mano al respecto y averiguar el sentir del pueblo.

c) *Barbada*

15) El Comité Especial recuerda que, la última vez que examinó la situación del Territorio, Barbada había iniciado activamente negociaciones para formar una federación o asociación con territorios vecinos.

16) Señala que, después que uno de los Territorios que participaba en las negociaciones hubo determinado retirarse de ellas, el Poder Legislativo de Barbada decidió por separado solicitar la independencia del Territorio.

17) El Comité Especial acoge con agrado la fijación del 30 de noviembre de 1966 como fecha en la que Barbada obtendrá la independencia.

18) El Comité Especial observa que aún es posible que Barbada forme parte de una federación, en caso de que el pueblo de Barbada exprese ese deseo por conducto de sus representantes electos.

d) *Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente*

19) El Comité Especial, después de oír la intervención de la Potencia Administradora así como la del peticionario de Granada, estimó que no era posible conceder a la cuestión de estos Territorios la consideración detallada que requieren. Por ello, decide posponer su consideración de esta cuestión y examinar detalladamente la situación en estos Territorios al principio de sus sesiones de 1967, sin perjuicio de las decisiones que la Asamblea General pueda tomar en su vigésimo primer período de sesiones.

IV. BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS E ISLAS CAIMÁN

A. *Examen por el Subcomité**Introducción*

178. El Subcomité consideró estos Territorios en sus sesiones 51a., 54a. y 59a., celebradas entre el 31 de agosto y el 11 de octubre de 1966.

179. El Subcomité tuvo ante sí los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 194 a 305). Los miembros del Subcomité escucharon asimismo declaraciones que los peticionarios de las Bahamas, el Sr. Lyndon O. Pindling, jefe de la oposición, y el Sr. Randol F. Fawkes, miembro de la Asamblea Legislativa, hicieron en las sesiones 466a. y 467a. del Comité Especial, celebradas los días 14 y 15 de septiembre de 1966.

180. De conformidad con el procedimiento acordado por el Comité Especial, el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como Potencia Administradora, participó en los trabajos del Subcomité acerca de estos Territorios, por invitación del Presidente.

Declaraciones generales

181. El representante del Reino Unido declaró que los cuatro Territorios de las Bahamas, las Bermudas, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán habían sido agrupados por razones prácticas, aunque no formaran un grupo político o geográfico homogéneo.

182. El último debate sobre las Bahamas en el Comité Especial había tenido lugar el 23 y 24 de agosto de 1965, sesiones 376a. y 377a., cuando el Comité había escuchado a un peticionario y una declaración completa de la delegación del Reino Unido sobre una amplia gama de cuestiones constitucionales y de otra índole planteadas por el peticionario. El Subcomité disponía de información adicional sobre las Bahamas en dos documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase cap. XXII, párrs. 234 a 284).

183. El Subcomité quizás deseara tomar nota de un nuevo acontecimiento relativo a posibles conflictos de interés entre las funciones oficiales y los intereses privados de los ministros de

las Bahamas. En una pequeña comunidad como las Bahamas, intervenían en la vida política muchos particulares con intereses financieros y de otro tipo, pero la separación de las funciones ministeriales y las actividades privadas, normal en países más importantes, no se había considerado practicable o incluso necesariamente deseable en este Territorio. Naturalmente, la sanción final contra todo abuso de ese sistema descansaba en el sistema electoral y el derecho democrático de la población a seleccionar sus propios dirigentes sobre la base del sufragio universal. No obstante, además de esta garantía, el Gobierno de las Bahamas había promulgado recientemente un nuevo Código de Conducta que regía la cuestión de los intereses ministeriales. El Código, publicado en las Bahamas el 29 de julio de 1966, ampliaba y formalizaba los principios enunciados en la declaración parlamentaria hecha por el Primer Ministro en abril de 1964, cuyo texto íntegro había sido citado por el representante del Reino Unido en la 377a. sesión del Comité Especial. Dicho Código estipulaba como principio inmutable que ningún ministro podría permitir que sus intereses privados influyeran en el desempeño de sus funciones públicas. También exigía que los ministros procuraran, en la medida de lo posible, no sólo evitar todo conflicto real de intereses, sino también que su conducta no fuera motivo de críticas o sospechas al respecto. Cuando se suscitaba un conflicto inevitable, el ministro interesado estaba obligado a dar a conocer sus intereses y a retirarse de todas las funciones oficiales relacionadas con la cuestión controvertida y de todas las reuniones del Gabinete en que se estudiara la cuestión. Si existía alguna duda en cuanto a si había surgido o no un verdadero conflicto de intereses, los ministros estaban obligados a actuar como si se hubiese planteado un conflicto, por lo cual el interés público tenía el beneficio de la duda. Finalmente, el Código establecía que ningún ministro podría utilizar en beneficio propio cualquier información de la cual hubiera tenido conocimiento en virtud de su cargo ministerial.

184. Ciertos puntos de los documentos de trabajo exigían algunos comentarios. Se decía acertadamente que la educación en las Bahamas era obligatoria de los 5 a los 14 años (véase cap. XXII, párr. 280), pero también debería señalarse su carácter gratuito. Se afirmaba que las próximas elecciones se realizarían sobre la base del sufragio universal de los adultos (*ibid.*, párr. 235); quizás deseara el Subcomité tener en cuenta que el Territorio había disfrutado efectivamente del sufragio universal de los adultos desde 1962, año en que los derechos políticos se habían extendido a las mujeres, y que el segundo voto basado en requisitos de propiedad había sido abolido en virtud de la nueva Constitución. La referencia hecha en el mismo párrafo al ejercicio de facultades discrecionales por el Gobernador exigía una pequeña explicación. Según la Constitución, el Gobernador, en uso de sus facultades discrecionales, era responsable de las relaciones exteriores, la defensa, la seguridad interior y todos los asuntos relativos a la policía, pero estaba obligado a mantener informado al Gabinete de cualesquiera cuestiones relativas a las relaciones exteriores o la defensa que pudieran influir en los intereses económicos o financieros del Territorio o llevar consigo la promulgación de leyes por su órgano legislativo.

185. Se declaraba que el National Democratic Party (NDP) había pedido que se incluyesen en la constitución disposiciones sobre los derechos fundamentales que se aplicarían en forma retroactiva (*ibid.*, párr. 240). De hecho, los artículos 2 a 13 de la Constitución, que había entrado en vigor el 7 de enero de 1964, contenían disposiciones completas sobre los derechos fundamentales. Se había designado a un Comisionado especial para que examinara las leyes anteriores que pudieran considerarse incompatibles con esas disposiciones sobre derechos humanos. El Comisionado no había informado que las leyes mencionadas en el párrafo 44 fuesen incompatibles con las disposiciones sobre derechos humanos, razón por la cual dichas leyes no habían quedado excluidas del ámbito de aplicación de esas disposiciones. En todo caso, toda la legislación promulgada desde enero de 1964 se encontraba sujeta a las disposiciones sobre derechos fundamentales.

186. La afirmación según la cual el salario medio seguía siendo de 5 libras por semana era inexacta y estaba basada al parecer en una interpretación errónea de la información co-

respondiente a 1964 suministrada por la Potencia Administradora en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, pues según dicha información el índice del costo de vida se había calculado sobre la base de un salario medio de 5 libras por semana. Este salario, que había sido establecido en 1949, no había sido modificado durante varios años y había dejado de responder a la realidad; en consecuencia, en abril de 1965 se había pedido al Ministerio de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido que prestara asistencia técnica para elaborar un nuevo índice. Este índice se basaba en un salario de 20 libras por semana, y se habían publicado las primeras cifras del nuevo índice para el trimestre de abril a junio de 1966, para cuya preparación se había utilizado como nueva base el trimestre de enero a marzo de este año. No se había hecho ningún cálculo o estimación del salario medio desde 1959, año en que había sido calculado en 9 libras y 5 chelines pero desde entonces había habido varios aumentos de salarios.

187. La cifra dada como remesas netas de los trabajadores de Bahamas residentes en los Estados Unidos era en realidad la cifra de los ingresos brutos en 1964. La cuantía conocida de las remesas enviadas por conducto de organismos oficiales había sido de 413.855,96 dólares, pero las remesas totales a las Bahamas desde luego habían sido superiores, dado que muchos trabajadores habían enviado sumas por conductos privados. Ya había cesado la contratación de trabajadores agrícolas para los Estados Unidos.

188. Respecto de la petición del Progressive Liberal Party (PLP) de que se reconociera la libertad de expresión y reunión a los sindicatos de Freeport (*ibid.*, párr. 239), en realidad, en esta ciudad no existía restricción alguna sobre las actividades sindicales, y la sección local del Hotel and Catering Workers' Union había sido reconocida por uno de los principales hoteles de Freeport.

189. Se hacían también amplias referencias a las condiciones existentes en Freeport (*ibid.*, párrs. 248 a 251). El representante del Reino Unido dijo que iba a tratar con cierto detalle varios puntos, por habérseles dado gran publicidad. Muchas de las afirmaciones recogidas habían sido contestadas detenidamente en una declaración publicada en junio de 1966 por el presidente de las dos sociedades que poseían y administraban casinos en Freeport y Nassau, declaración en la que se había señalado que ambos casinos eran explotados en virtud de certificados concedidos por el Gobierno. Estos certificados estipulaban que las sociedades registradas debían conservar la plena dirección de las casas de juego. El Gobierno de las Bahamas había establecido un sistema de control sobre su explotación que ofrecía la máxima seguridad contra las prácticas ilegales, así como un sistema de fiscalización policiaca previa del personal de los casinos. Existían varios procedimientos en virtud de los cuales se efectuaba una verificación periódica y constante de la identidad e idoneidad de dicho personal. Las cuentas diarias de estas empresas estaban sujetas a la verificación local por contadores de renombre internacional, cuyos últimos informes indicaban que consideraban correctas esas cuentas. Además, el sistema tributario garantizaba que toda la comunidad se beneficiaría de la explotación de las casas de juego. Por ejemplo, en 1966 se habían fijado a cada casino impuestos por un total de 280.000 dólares, gravándose a las máquinas de juegos con importantes impuestos anuales que habían oscilado entre 280 y 840 dólares. Los ingresos totales recaudados por el Gobierno en 1966 de estas organizaciones habían sido estimados en más de 600.000 dólares. Por otra parte, la empresa interesada se había comprometido por contrato a reinvertir una gran parte de sus ingresos anuales en el fomento de la industria hotelera, lo cual beneficiaría a todo el Territorio. Sólo el casino de Freeport había pagado al Gobierno alrededor de 315.000 dólares de impuestos en 1965, habiendo contribuido con otros 317.000 dólares a una organización cívica sin fines de lucro creada para ayudar a fomentar el turismo. El presidente de las sociedades había señalado también que las estadísticas de la policía no confirmaban las afirmaciones relativas al aumento de la delincuencia en Freeport debido a las casas de juego. Finalmente, había indicado que, según se calculaba, unos 5.000 habitantes de las Bahamas estaban empleados en Freeport en la industria turística y

actividades conexas, lo que constituía un beneficio indudable para la comunidad de las Bahamas.

190. Refiriéndose al proyecto de ley presentado por la oposición para la revisión del sistema electoral (*ibid.*, párrs. 245 a 247), dio información detallada acerca de los objetivos de ese proyecto y expuso los motivos por los que el Gobierno de las Bahamas había defendido el sistema de las cédulas de votación — que según la oposición constituían un factor de corrupción — por estimar que en un país donde las confusiones eran difíciles de evitar (muchos de los nombres eran idénticos) era difícil prescindir de ellas.

191. Los planes de empréstitos para el programa de obras públicas previsto por el Gobierno (*ibid.*, párrs. 260 y 261) (ampliación del puerto de Nassau, expansión de las telecomunicaciones y de la red de abastecimiento de agua) no alcanzaban la cifra de 62 millones de dólares mencionada. Si se sumaban los importes de los diversos empréstitos previstos (uno de 14 millones de dólares para ampliar el puerto de Nassau, que se negociaría en los Estados Unidos, otro de 13.800.000 dólares negociado con el Export-Import Bank para el mismo fin, otro de 9.400.000 dólares para la expansión de las telecomunicaciones, que se negociaría en los Estados Unidos, y uno de 3.500.000 dólares, que se negociaría en el Canadá), se llegaba a un total de 40.700.000 dólares, cifra netamente inferior a la citada. Los gastos previstos en un principio para la ampliación del puerto y la mejora de las telecomunicaciones y la red de abastecimiento de agua ascendían a 37 millones de dólares, pero era difícil hacer previsiones exactas en esa etapa. Este programa no entrañaría necesariamente un aumento de los impuestos y los gravámenes para reembolsar los empréstitos, ni por tanto un aumento del costo de la vida. En realidad, la ampliación del puerto, al permitir que atracaran barcos de gran calado, estimularía el turismo y los negocios, lo que pronto representaría una fuente de ingresos; lo mismo ocurriría con la expansión de la red de telecomunicaciones. Sólo el reembolso del empréstito para el plan de abastecimiento de agua tendría que financiarse exclusivamente con ingresos públicos.

192. En cuanto a la implantación de nuevas industrias en las Bahamas, el representante del Reino Unido comentó las alegaciones reproducidas en el documento de trabajo, diciendo que los derechos de los nacionales de las Bahamas serían protegidos, pues, en virtud del acuerdo concertado entre la empresa Owen-Illinois y el Gobierno de las Bahamas, la sociedad se comprometía a emplear autóctonos en la mayor medida posible (cláusula 1, párrafo 6) y a darles capacitación (cláusula 1, párrafo 7). La empresa podría importar personal de los Estados Unidos, a condición de que lo repatriara oportunamente; por lo demás, ya había contratado mucha mano de obra en el Territorio.

193. Si los precios habían aumentado en Bahamas (véase cap. XXII, párrs. 270 a 274) ello se debía fundamentalmente a que el Territorio debía importar grandes cantidades de productos alimenticios del Reino Unido y de los Estados Unidos, donde los precios estaban subiendo. Era posible que la adopción del sistema monetario decimal y del dólar como unidad monetaria hubiera permitido a ciertos comerciantes aumentar sus precios so pretexto de redondearlos. La Cámara de Comercio ya había intervenido para evitar los abusos; las conversiones de precios se habían efectuado de manera exacta en las tiendas principales donde se habían fijado carteles para informar a los consumidores. En 1965, después de consultar con los sindicatos, el Gobierno había propuesto la adopción de un nuevo índice de precios, pues el anterior, fijado en 1949, no se ajustaba a la realidad. Por su parte, el congreso de los sindicatos había propuesto un índice según el cual los precios habrían aumentado en un 71% entre septiembre de 1963 y junio de 1966, pero, como había declarado el Ministro de Trabajo y Vivienda, este índice no tenía gran significado, porque los métodos de cálculo empleados estaban equivocados y sobre todo porque se tenían en cuenta artículos cuyos precios habían aumentado de manera especialmente notable. El comité especial creado para asegurar la protección del poder adquisitivo, en cumplimiento de una resolución presentada por el Sr. Pindling (PLP), no había recibido hasta entonces más que tres denuncias relativas

a abusos en la conversión de precios, una de las cuales era anónima, mientras que las otras se referían a cuestiones de poca gravedad.

194. El documento de trabajo sobre las Bermudas (véase cap. XXII, párrs. 194 a 233) también requería algunos comentarios. En el párrafo 28 de ese documento (*ibid.*, párr. 221) se aludía a la cuestión del reconocimiento de los sindicatos por el Gobierno, la cual había sido tratada con amplitud por un peticionario ante el Comité Especial. La política del Gobierno de las Bermudas era que las juntas o departamentos oficiales podían reconocer a los sindicatos que representaran a un número importante de empleados del departamento interesado y que debían conceder el reconocimiento cuando tuvieran el convencimiento de que el sindicato representaba a la mayoría de los empleados. En enero de 1966, el Gobierno de las Bermudas había adoptado oficialmente una guía para la dirección de las relaciones laborales en la cual se establecían ciertos principios fundamentales reguladores de las buenas relaciones de trabajo. El representante tendría sumo placer en facilitar una copia de la guía a los miembros del Subcomité que desearan leerla. El primer párrafo del artículo I estipulaba que "los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas son aceptables como declaración de fines deseables". A continuación, en la guía se decía que se reconocía plenamente el derecho de los trabajadores que desearan organizarse en sindicatos y celebrar negociaciones colectivas y que no habría intimidación o coerción alguna en el ejercicio de estos derechos. Se recomendaba que cuando un sindicato pudiera demostrar, por votación secreta, que la mayoría de los empleados de una empresa deseaban que les representara determinada unidad de negociación colectiva, debería reconocerse a esta última a los efectos de la negociación colectiva. Las disposiciones de la guía habían sido recomendadas al Gobierno por la Comisión Consultiva en Relaciones de Trabajo, compuesta de representantes designados en número igual por las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

195. La cuestión de la educación había sido suscitada por peticionarios ante el Comité Especial, habiendo despertado gran interés. La información dada en el documento de trabajo (*ibid.*, párrs. 224 y 225) era muy atrasada. Como resultado de la legislación promulgada en 1965 y 1966, se habían introducido cambios importantes en los sistemas y condiciones de enseñanza. En el otoño de 1965 se había puesto en práctica la matriculación de los alumnos de acuerdo con las nuevas edades de escolarización obligatoria de los 5 a los 14 años. El límite superior de la edad escolar reglamentaria pasaría de los 15 años en 1967 a los 16 en 1969. La nueva legislación había sustituido los términos "incorporadas", "no incorporadas" y "gratuitas" por los términos "subvencionadas" y "mantenidas". Las anteriores escuelas incorporadas, que estaban situadas en edificios públicos, habían quedado clasificadas como mantenidas, en tanto que las situadas en edificios pertenecientes a la directiva de la escuela habían sido clasificadas como subvencionadas. Había 25 escuelas primarias (20 mantenidas y cinco subvencionadas), cinco escuelas especiales, 10 institutos secundarios (cinco subvencionados y cinco mantenidos), una escuela profesional y dos instituciones de enseñanza superior (cursos dados después del horario normal en las escuelas diurnas ya indicadas). La educación de los alumnos en edad escolar era gratuita en todas las escuelas subvencionadas y mantenidas, excepto para los alumnos de escuelas secundarias incluidos en la categoría "B" que pagaban derechos de matrícula. De este modo, el pago de derechos de matrícula estaba limitado a los estudiantes de la categoría "B" de tales escuelas cuyos padres decidían pagar derechos de matrícula por los puestos de esa categoría en escuelas determinadas, así como a los educados en escuelas enteramente privadas. Los derechos de matrícula más altos aún pagaderos eran de 195 libras por año en una escuela privada. A partir de septiembre de 1967, los estudiantes de las escuelas subvencionadas y mantenidas que se prepararan para los exámenes de nivel "A" recibirían instrucción en un nuevo centro académico de sexto grado. Finalmente, se habían adoptado disposiciones legislativas para garantizar que la raza dejara de ser un criterio de admisión a las escuelas subvencionadas y man-

tenidas. Esta nueva información tenía relación directa con algunas de las quejas mencionadas (*ibid.*, párr. 229).

196. El principal acontecimiento registrado en las Bermudas desde la última vez que el Subcomité había tratado del Territorio había sido el anuncio hecho el 11 de julio de 1966 de que el Secretario de Estado para las Colonias había invitado, por conducto del Gobierno, a una delegación de representantes de los órganos legislativos de las Bermudas a participar en una conferencia constitucional que se iniciaría en Londres el 8 de noviembre. El documento de trabajo quizás diera una impresión ligeramente errónea de la naturaleza de la delegación de las Bermudas a dicha conferencia. De hecho, en ella estarían ampliamente representados todos los puntos de vista existentes en los órganos legislativos de las Bermudas, y estaría compuesta de tres representantes del Consejo Legislativo y de quince miembros de la Asamblea. Entre estos últimos se contarían ocho miembros del United Bermuda Party (UBP), los tres miembros del Progressive Labour Party (PLP) y cuatro miembros independientes, incluido el ex jefe del grupo parlamentario del PLP. En la conferencia se examinaría el informe de la Comisión Mixta especial de las Bermudas que se había creado para que estudiara los cambios constitucionales. Dicha comisión había publicado un informe provisional en julio de 1965 y un informe completo en noviembre de 1965. En el primero se recomendaba que se redujera la edad para votar a 21 años y que se aboliera el segundo voto a que habían tenido derecho ciertas categorías de propietarios. En enero de 1966 se habían promulgado disposiciones legislativas para dar cumplimiento a estas recomendaciones. Otras propuestas de la mencionada Comisión se resumían en el documento de trabajo (véase cap. XXII, párrs. 195 a 203).

197. Era poco lo que podía añadirse a la información sobre las Islas Turcas y Caicos dada en el documento de trabajo sobre este Territorio (*ibid.*, párrs. 285 a 295). Como recordaría el Subcomité, un grupo de trabajo que se había reunido en Nassau en 1964 para estudiar la posibilidad de una fusión de las Islas Turcas y Caicos con las Islas Bahamas había hecho recomendaciones sobre los procedimientos mediante los cuales las Bahamas podrían ayudar a las Islas Turcas y Caicos facilitándoles personal, asesoramiento técnico y otras formas de asistencia. De resultados de esas recomendaciones, en noviembre de 1965 se había promulgado una ley en virtud de la cual el Gobernador de las Bahamas había pasado a ser también Gobernador de las Islas Turcas y Caicos. Una de las razones de este cambio había sido el deseo de la población de estas últimas islas de tener un vínculo administrativo con alguna autoridad exterior, por lo cual el cambio había sido bien recibido en el Territorio. El Gobierno y la Constitución de las Bahamas no habían resultado afectados por esa medida. En virtud de otras disposiciones legislativas se habían transferido del Tribunal de Apelación de Jamaica al Tribunal de Apelación de las Islas Bahamas los recursos contra las decisiones de los tribunales de las Islas Turcas y Caicos.

198. Con respecto a las Islas Caimán, el principal acontecimiento reciente habían sido las elecciones generales celebradas en noviembre de 1965. Estas elecciones, cuya cuestión principal había sido el ritmo del progreso constitucional, habían sido impugnadas por el National Democratic Party (NDP), el Christian Democratic Party (CDP) y doce candidatos independientes. El NDP, que había abogado porque el Territorio avanzase rápidamente hacia la autonomía interna, había obtenido un puesto en la Asamblea Legislativa, en vez de los seis que tenía en la Asamblea anterior. El CDP, que había recomendado que el ritmo del progreso hacia la autonomía fuese más lento y seguro, había ganado cuatro puestos, en comparación con cinco en la Asamblea precedente. De los candidatos independientes, que en su mayoría se habían declarado en favor de un cambio constitucional más lento, habían resultado elegidos siete, contra uno en la otra Asamblea. Había votado el 58,4% del electorado.

199. El 23 de junio de 1966, el Secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, en respuesta a una pregunta relativa a las futuras instituciones administrativas de las Islas Caimán, había manifestado ante la Cámara de los Co-

munes que el Gobierno del Reino Unido se guiaría por la opinión local de dichas Islas y había declarado que esperaba recibir un informe sobre los cambios constitucionales que prepararía una comisión de la nueva Asamblea Legislativa.

200. La ayuda del Reino Unido a las Islas Turcas y Caicos de 1955-1956 a 1964-1965 había ascendido a 1.870.000 dólares de los Estados Unidos, en tanto que la concedida a las Islas Caimán durante el mismo período había sido de 344.000 dólares. En ambos casos, la ayuda había consistido casi enteramente en subsidios y asistencia técnica. Las cifras provisionales para 1965-1966 eran: 571.000 dólares para las Islas Turcas y Caicos y 176.000 dólares para las Islas Caimán. Calculada sobre una base per cápita, la ayuda había sido considerable, ya que las Islas Turcas y Caicos tenían 6.000 habitantes solamente y las Islas Caimán tenían casi 9.000 habitantes. Un proyecto que merecía especial atención era la modernización del aeropuerto de Gran Caimán, para lo cual se había firmado un contrato en noviembre de 1965. El proyecto costaría 1.280.000 dólares, y sería financiado con un subsidio de 560.000 dólares y un préstamo del Gobierno del Reino Unido por valor de 720.000 dólares.

201. El Subcomité observaría una vez más que los procesos de actividad democrática se sucedían a veloz ritmo en los cuatro Territorios. Los próximos acontecimientos de importancia en el campo constitucional serían el informe de la Comisión de la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán sobre los posibles cambios constitucionales, las elecciones en las Bahamas, que deberían celebrarse a más tardar a finales de 1967 según el nuevo régimen electoral, y la Conferencia Constitucional de las Bermudas sobre las recomendaciones del comité especial de la Asamblea de este Territorio.

202. El representante de Bulgaria dijo que el representante de la Potencia Administradora no había mencionado ninguna medida concreta destinada a aplicar los principios de la Declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General o atender las recomendaciones del Comité Especial. Como la Potencia Administradora no había aceptado que una misión visitara las Bahamas, el Comité Especial sólo disponía de los datos limitados que figuraban en los documentos de trabajo de la Secretaría y de los proporcionados por la delegación británica. Al parecer, la situación no había evolucionado mucho desde 1964. En las Bahamas, en especial, persistía el régimen colonial, el Gobernador seguía teniendo poderes discrecionales y la ley electoral no había sido modificada. El sistema electoral era tal que, en las últimas elecciones, el Progressive Liberal Party, que había obtenido el 44% de los votos, sólo había logrado el 24,3% de los escaños, en tanto que al United Bahamian Party, que había obtenido el 36,6% de los votos, se atribuía el 57,6% de los escaños. Los documentos de trabajo de la Secretaría indicaban que ciertas reformas propuestas por el Progressive Liberal Party para organizar elecciones más democráticas habían sido rechazadas por el partido que ocupaba el poder. Las cédulas de votación seguían siendo consideradas como "efectos negociables". El representante de Bulgaria señaló a la atención del Subcomité el papel que representaban los casinos y casas de juego, que en su mayor parte estaban controlados por capitales americanos a los cuales se aplicaba un régimen impositivo privilegiado. Al parecer, los directores de ciertos establecimientos se habían comprometido a pagar una contribución al Gobernador, a condición de que su contabilidad no fuera sometida a verificación local. Muchos súbditos británicos podían tomar parte en las elecciones porque adquirían el derecho a voto al cabo de seis meses de residencia en las Bahamas.

203. El representante de Bulgaria dijo que creía que las elecciones de 1967 se desarrollarían probablemente en las mismas condiciones que las anteriores. Por otra parte, el representante de la Potencia Administradora no había abordado la cuestión del Centro de Ensayos Submarinos del Atlántico (Atlantic Underwater Test and Evaluation Centre) que sin embargo revestía un interés primordial. La creación de una base militar en suelo extranjero constituía un grave peligro para la paz y seguridad de la población directamente interesada, e incluso de todo el mundo. En esta base, cuya superficie

era de 210 hectáreas, en una región neurálgica del globo terrestre se hallarían destacados 1.300 marinos y civiles norteamericanos. Esta innovación, desde luego, no era compatible con los intereses de la población de las Bahamas, a la que no se había consultado en absoluto. El procedimiento empleado por la Potencia Administradora, que disponía de poderes discrecionales para dirigir la política exterior y la defensa de las Bahamas, era indudablemente contrario al espíritu y a la letra de la declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

204. El representante del Reino Unido invitó al representante de Bulgaria a que consultara las actas de las sesiones celebradas en 1965 por el Comité Especial e indicó que los documentos de trabajo daban igualmente detalles sobre los cambios que se habían registrado en la situación de las Bahamas después de la Conferencia Constitucional de las Bahamas, que había tenido lugar en Londres en mayo de 1963. El sistema electoral criticado por el representante de Bulgaria ya no estaba en vigencia y, en particular, había quedado suprimido el segundo sufragio a favor de los electores que eran propietarios o arrendatarios de bienes raíces.

205. En lo que respecta a los casinos de Freeport y Nassau, el representante del Reino Unido se remitió a su declaración del 1º de septiembre, en la que ya había refutado afirmaciones análogas.

206. En cuanto al Centro de Ensayos Submarinos del Atlántico (Atlantic Underwater Test and Evaluation Centre), el representante del Reino Unido invitó al Subcomité a remitirse al documento de trabajo de la Secretaría (véase cap. XXII, párr. 259), en el que se mencionaba que las Bahamas habían participado en el acuerdo firmado entre el Reino Unido y los Estados Unidos. No cabía hablar, pues, de un acuerdo concertado sin consultar a la población interesada.

207. El representante de Bulgaria dijo que, si bien era cierto que la Conferencia Constitucional de 1963 había propuesto ciertas modificaciones del sistema electoral y que éstas, según el representante del Reino Unido, ya se habían aplicado, no por ello era menos cierto que la situación no parecía satisfactoria, pues los peticionarios a quienes el Comité Especial había escuchado durante el anterior período de sesiones habían declarado que las últimas elecciones no se habían desarrollado en condiciones democráticas.

208. Por lo que hace a los casinos y demás casas de juego, la prensa de los Estados Unidos había difundido ampliamente información a este respecto y la delegación de Bulgaria había fundado su declaración en datos que figuraban en documentos oficiales de la Secretaría. El representante de Bulgaria invitó a los miembros del Subcomité a que consultaran el documento de trabajo (*ibid.*) en el que se decía: "El 14 de abril de 1966 se inauguró oficialmente el Atlantic Underwater Test and Evaluation Centre (AUTEC) en Andros. La base, un proyecto conjunto angloamericano, había estado en construcción durante los últimos dos años y su costo era entonces de 17 millones de dólares." La Potencia Administradora, que dirigía la política exterior y la defensa de las Bahamas, era la única responsable de las negociaciones, que se habían desarrollado sin consultar a la población.

B. Aprobación del informe

209. El Subcomité aprobó sus conclusiones y recomendaciones acerca de estos Territorios (véase párr. 211 *infra*) por consenso, en su 59ª sesión, celebrada el 11 de octubre de 1966.

210. El representante de Bulgaria reservó la posición de su delegación.

C. Conclusiones y recomendaciones

211. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones y recomendaciones generales

1) El Comité Especial recuerda sus conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, Bahamas, Islas Turcas

y Caicos e Islas Caimán adoptadas en 1964 y refrendadas por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones.

2) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos Territorios.

3) El Comité Especial lamenta que la Potencia Administradora no haya aplicado todavía la Declaración en esos Territorios e insta a que lo haga sin demora.

4) El Comité Especial considera que, en vista de que no dispone de suficiente información sobre esos Territorios y de que, en el caso del Territorio de las Bahamas, las declaraciones del representante de la Potencia Administradora y de los peticionarios respecto a las condiciones de ese Territorio son contradictorias, la Potencia Administradora debe permitir al Comité Especial que envíe lo antes posible una misión visitadora al Territorio.

5) El Comité Especial considera que la Potencia Administradora debe tomar inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos Territorios, sin condiciones ni reservas, de conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.

6) Asimismo, se muestra convencido de que, sobre todo en el caso de los pequeños Territorios, las Naciones Unidas deben tomar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de estos Territorios tengan la posibilidad de expresarse libremente en cuanto a su situación futura, con pleno conocimiento de las diversas opciones que se les ofrecen.

7) El Comité Especial, después de escuchar la declaración de la Potencia Administradora y las de los peticionarios de las Bahamas, no tuvo oportunidad de examinar la cuestión

de estos Territorios con el detenimiento necesario. Decide, por lo tanto, aplazar el examen de esta cuestión y, sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, examinar la situación de estos Territorios con detalle lo antes posible en sus reuniones de 1967.

V. ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)

212. En su 59a. sesión, el Subcomité aprobó la siguiente declaración en relación con el Territorio de las Islas Malvinas (Falkland Islands), y recomienda al Comité Especial que la apruebe:

"El Comité Especial recuerda las disposiciones de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, por la que la Asamblea: i) invitó a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands); ii) pidió a ambos Gobiernos que informaran al Comité Especial y a la Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones. El Comité Especial toma nota de la información proporcionada por los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido (A/AC.109/145 y Add.1, A/AC.109/146 y Add.1) en el sentido de que se celebraron reuniones sobre el problema los días 19 y 20 de julio de 1966 y de que proseguirían dichas reuniones."

CAPÍTULO XXIII*

INFORMACION SOBRE LOS TERRITORIOS NO AUTONOMOS TRANSMITIDA EN VIRTUD DEL INCISO e DEL ARTICULO 73 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CUESTIONES CONEXAS

1. Por su resolución 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, la Asamblea General disolvió la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos y, entre otras cosas, pidió al Comité Especial que estudiara la información transmitida al Secretario General en conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta, y la tuviera plenamente en cuenta al examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

2. Como se recordará, con objeto de desempeñar sus funciones en virtud de la resolución mencionada *supra*, el Comité Especial, en su 315a. sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1964, aprobó ciertos procedimientos sugeridos por el Secretario General (A/5800/Rev.1¹, cap. II, apéndice I). Estos procedimientos fueron también aprobados ulteriormente por la Asamblea General en su resolución 2109 (XX).

3. En cumplimiento del párrafo 5 de la parte positiva de la resolución 1970 (XVIII) de la Asamblea General, y en conformidad con los procedimientos aprobados por la Asamblea General, la Secretaría utilizó la información más reciente transmitida por los Estados Miembros administradores al preparar los documentos de trabajo sobre la mayoría de los territorios para el Comité Especial. Cuando examinó la situación

de los Territorios el Comité Especial tuvo en cuenta esta información, que se refleja en el capítulo del informe de dicho Comité acerca de cada uno de los Territorios.

4. En su resolución 2109 (XX) de 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General, además de aprobar los procedimientos antes mencionados y de pedir al Comité Especial que siguiera desempeñando las funciones que se le han asignado en virtud de esos procedimientos, manifestó a los Estados Miembros administradores lo siguiente:

"2. *Deplora* que no todos los Estados Miembros que son responsables de la administración de territorios no autónomos hayan considerado oportuno transmitir información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas;

"3. *Encarece nuevamente* a todos los Estados Miembros, que tienen o asumen la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos todavía no han alcanzado la plena autonomía, que transmitan o sigan transmitiendo al Secretario General la información prescrita en el inciso e del Artículo 73 de la Carta, así como los datos más completos posibles sobre la evolución política y constitucional."

5. En conformidad con los procedimientos mencionados *supra*, el Comité Especial, en sus sesiones 472a. y 473a. celebradas el 12 y el 19 de octubre de 1966, examinó un informe del Secretario General (véase

* Publicado anteriormente con la signatura A/6300/Add.10.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno período de sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I).

apéndice) sobre la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta hasta el 18 de octubre de 1966 y sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 1970 (XVIII) de la Asamblea General.

6. En la 472a. sesión el representante de la República Unida de Tanzania declaró que el Comité Especial tenía que comprobar una vez más que el Gobierno fascista de Portugal no había comunicado información alguna sobre los territorios que administra. Ninguna condenación podía ser bastante enérgica para un Gobierno que no cesaba de pisotear las reglas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional. Se sabía que el Gobierno portugués estaba siguiendo una política de aniquilamiento en los territorios que administra. Eran innumerables las atrocidades cometidas en esos territorios y los miembros del Comité habían podido darse cuenta de todo su horror durante la proyección de las películas que se les exhibieron cuando el Comité estaba en Argel. Añadió que la guerra que se libra en esos territorios tiene por objeto, en definitiva, conservar para Portugal la posibilidad de explotar, de ser menester hasta que se agoten, todos los recursos de esos territorios; y, para ello, Portugal recurría a sociedades y a grupos financieros extranjeros. Ante esta situación intolerable era más necesario que nunca comunicar a la Asamblea General la información referente a los territorios administrados por Portugal, información que la Potencia Administradora quería ocultar a toda costa al mundo entero. En un momento en que los monopolios disimulaban más que nunca su actuación detrás de la política portuguesa, había que desenmascararlos.

7. El informe del Secretario General también permitía advertir que otras Potencias administradoras tampoco habían comunicado a las Naciones Unidas toda la información que se esperaba de ellas. Por ejemplo, Nueva Zelandia no había suministrado información respecto al año terminado en marzo de 1966; y el Comité Especial debía, pues, pedirle que cumpliera lo más rápidamente posible con sus obligaciones. Por su parte, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no había comunicado información alguna sobre Rhodesia del Sur. Sin duda tenía la intención de abstenerse de dar precisiones en lo referente a ese Territorio. Toda su actitud en el asunto de Rhodesia del Sur confirmaba, por lo demás, que sólo trataba de engañar a la opinión mundial. En efecto, aunque proclamaba tener la intención de tomar disposiciones contra el régimen de Ian Smith, discutía, de hecho, de igual a igual con los representantes de ese régimen. Semejante actitud de desafío, que ya hacía mucho se había hecho intolerable, exigía una acción enérgica, y había que exigir del Gobierno del Reino Unido que comunicase información sobre Rhodesia del Sur.

8. Acerca de la información comunicada por los Estados Unidos de América cabía decir que se refería únicamente al año 1964. Sin embargo, la prensa publicaba a fines de septiembre de 1966 que una de las islas norteamericanas de Samoa se había de transformar en "paraíso turístico". Parecía, según las noticias publicadas por la prensa, que todo lo que se tenía la intención de hacer respondía exclusivamente a los intereses de los turistas y no en lo más mínimo a los de los autóctonos.

9. En general, fuera por lagunas o por insuficiencias, la información relativa a los territorios no autó-

nomos era poco satisfactoria. Por ello, la delegación de la República Unida de Tanzania estimaba que debía preocuparse sin tardanza por mejorar su calidad.

10. En la 473a. sesión, el Presidente señaló a la atención del Comité una carta, de fecha 18 de octubre de 1966, que le había dirigido el Representante Permanente de Nueva Zelandia ante las Naciones Unidas, copias de la cual había puesto a disposición de los miembros. En dicha carta, el Representante Permanente de Nueva Zelandia manifestaba que su Gobierno tomaba muy en serio la obligación de transmitir información completa sobre los territorios bajo su administración, y deploraba el hecho de que un miembro del Comité Especial hubiese expresado críticas sobre la forma en que su Gobierno cumplía esa importante obligación. El Representante Permanente de Nueva Zelandia manifestaba asimismo que hacía unos días se habían transmitido oficialmente al Secretario General ejemplares adelantados de los informes correspondientes al año terminado el 31 de marzo de 1966. Dado que se necesitaban meses para reunir la información detallada que requería la resolución 551 (VI) de la Asamblea General, era difícil para una Potencia Administradora proporcionar dicha información antes de lo que lo había hecho su Gobierno. Por lo demás, su delegación había facilitado, con anterioridad, directamente al Subcomité II amplia información sobre los Territorios bajo administración de Nueva Zelandia, lo que, a juicio del orador, era de un interés más directo para el Comité que los datos estadísticos requeridos en virtud de la resolución 551 (VI).

11. El representante de la República Unida de Tanzania, apoyado por el representante de Siria, manifestó que algunas Potencias administradoras habían transmitido información con tan poca antelación que ello equivalía a no presentarla, pues su tardanza no había permitido al Comité examinarla y utilizarla para su informe. Una Potencia Administradora, por ejemplo, había presentado su información el pasado 14 de octubre. Si no se enviaban los datos oportunamente, el examen que se podía efectuar era casi de rutina y no podía favorecer el logro del objetivo, es decir, la descolonización.

12. El representante de la India hizo observar que en el párrafo 3 del informe del Secretario General se señalaba que dos Potencias no habían cumplido con el inciso e del Artículo 73 de la Carta ni con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; en efecto, no se había transmitido información sobre los territorios bajo administración portuguesa ni sobre Rhodesia del Sur.

13. Causaba preocupación y merecía reprobación la actitud de Portugal, que sostenía que esos territorios formaban parte del país metropolitano, pese a su distancia de éste y a la resolución 1542 (XV) de la Asamblea General, que determinó que se trataba de territorios no autónomos.

14. Añadió que era lamentable la posición del Reino Unido con respecto a Rhodesia del Sur, posición que si bien podía parecer congruente cuando se afirmaba que el Territorio era autónomo desde 1923, no era aceptable para la India ni para la mayoría de las Naciones Unidas. En la resolución 1747 (XVI) de la Asamblea General se especificaba que Rhodesia del Sur era un territorio no autónomo y que debía transmitirse a su respecto la información correspondiente,

conforme a la Carta. El argumento de que el Reino Unido no podía intervenir en ese territorio era indefendible después de la declaración unilateral de independencia; en efecto, el propio Reino Unido había declarado que el régimen de Rhodesia del Sur estaba en rebelión contra el Gobierno del Reino Unido y que no se justificaba ya considerar autónomo a ese territorio. En 1965 el Reino Unido alegó que la cuestión de Rhodesia del Sur era de su exclusiva competencia, y en la actualidad, aunque no lo deseara, estaba obligado a tomar medidas. Podría, por lo menos, cumplir con el inciso e del Artículo 73 de la Carta.

15. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que apoyaba a los representantes de la República Unida de Tanzania y de la India en lo referente a la no transmisión de información por Portugal y el Reino Unido. Además, la información transmitida por las Potencias administradoras no era suficiente para dar a conocer la verdadera situación de los territorios coloniales. El representante soviético reiteró lo solicitado el año anterior por su delegación, o sea que la Secretaría recurriera a otras fuentes para obtener los datos que las Potencias administradoras no suministraran, a fin de formarse un cuadro más completo que permitiera hacer un examen más detallado y profundo y formular declaraciones precisas sobre la situación con respecto a la aplicación de la Declaración.

16. El representante de Malí consideró que debía condenarse a Portugal por no enviar información sobre los territorios que administra. Pese a que los datos que podría enviar tendrían valor muy relativo, porque sus días como Potencia Administradora estaban contados, ese país tenía, sin embargo, que cumplir con la Carta.

17. En lo referente a Rhodesia del Sur, el Primer Ministro del Reino Unido negaba reconocimiento a la independencia unilateralmente declarada y la calificaba acertadamente de ilegal. En ese caso, seguía siendo aplicable el inciso e del Artículo 73 de la Carta, pero el Reino Unido no transmitió información. Añadió el representante de Malí que el Reino Unido debería decidir si Rhodesia del Sur era una colonia o si, por el contrario, su régimen era legal, como parecía admitir cuando negociaba secretamente con él.

18. El representante de Bulgaria manifestó que la mayoría del Comité Especial compartía la opinión del representante de Tanzania acerca de la tardanza con que se transmitía la información. Esta situación era inaceptable, además, porque a menudo la información era incompleta, como señalara el representante de la Unión Soviética.

19. Resultaba sorprendente que no se enviara información sobre Rhodesia del Sur, asunto grave no sólo a juicio del Comité, sino también de la Asamblea General.

20. Añadió que la información sobre Samoa Americana correspondiente a 1964 se había enviado apenas el 4 de febrero de 1966, con lo cual se había privado al Comité de datos completos y al día. Cabía esperar que en lo futuro el Comité adoptara una aptitud más enérgica para que las Potencias administradoras tuvieran en cuenta su opinión.

21. El representante de los Estados Unidos de América, refiriéndose a los esfuerzos desplegados por

el representante de Tanzania en la sesión precedente con objeto de dar a entender que había algo siniestro en los planes que habían sido dados a conocer respecto al desarrollo del turismo en Samoa Americana, mediante la creación de un parque y la construcción de un hotel para turistas, dijo que algunas de esas afirmaciones eran tan forzadas que no merecían respuesta. El desarrollo del turismo era hoy día un aspecto importante de la política económica de muchas regiones del mundo, tratárase de países no autónomos o independientes. A juicio del citado representante la conjetura hecha en la sesión precedente resultaba probablemente tan desconcertante para otros miembros del Comité Especial como para la delegación de su país.

22. La serie de artículos de los que se había citado un extracto era interesante e informativa y el orador la señalaba a la atención de cualquier persona interesada en Samoa Americana. Con respecto a la afirmación de que las proyectadas inversiones en el turismo no beneficiarían a los habitantes autóctonos, citó un artículo de la misma serie en que se declaraba que, en virtud de la política de los Estados Unidos de que la Samoa Americana siguiera siendo de los samoanos, los norteamericanos del continente no podían poseer ni colonizar tierras samoanas, y estaba prohibida cualquier actividad comercial desarrollada por extranjeros sin una participación importante de los samoanos. El análisis que había hecho el representante de Tanzania sobre la serie de artículos era bastante incompleto y al parecer ese aspecto de la política norteamericana había escapado a la atención de dicho representante.

23. Con respecto a la transmisión de información reciente, el representante de los Estados Unidos declaró que se estaba preparando el informe sobre la situación actual de Samoa Americana, pero que, en cuanto a su fondo, ya se había comunicado al Comité gran parte de ese informe en las detalladas declaraciones efectuadas en el Subcomité II. No se tenía intención de retener ninguna información, como parecía querer dar a entender el representante de Tanzania. Sernejante política sería imposible puesto que en Samoa Americana no existía restricción alguna en materia de reportaje de prensa basado en los hechos.

24. El representante de la República Unida de Tanzania declaró, con referencia a una carta del Representante Permanente de Nueva Zelandia en las Naciones Unidas, suministrada oficiosamente a los miembros del Comité, que era absolutamente esencial que la información sobre los territorios no autónomos llegara a las Naciones Unidas en la fecha oportuna para que se la pudiera utilizar en los debates sobre el tema respectivo. La explicación ofrecida en la carta por Nueva Zelandia era inaceptable e inadecuada. En cuanto a las observaciones del representante de los Estados Unidos de América, cuyo tono estimaba inoportuno, señaló que la información sobre Samoa Americana correspondiente a 1964 no había llegado hasta febrero de 1966, y que la correspondiente a 1965 no había llegado todavía. Ese no era el modo de colaborar con las Naciones Unidas, y cabía esperar que la cuestión se señalara a la atención de la Asamblea General.

25. El Presidente convino con el representante de Tanzania acerca de las afirmaciones hechas en la mencionada carta y señaló que no correspondía a la

Potencia Administradora decidir qué clase de información era la más útil.

26. Los representantes de Siria y del Irak compartieron la opinión del representante de Tanzania en cuanto a la actitud que expresaba la carta del representante de Nueva Zelandia, que a juicio de ellos no debería pasar sin censura.

27. El representante de Australia dijo que se debería invitar a Nueva Zelandia a participar en el debate, si así deseara hacerlo.

28. El Presidente declaró que, con arreglo a sus normas, el Comité Especial no podía acceder a la sugerencia, dado que no había recibido ninguna solicitud de Nueva Zelandia.

29. El representante de Chile puso de relieve que la tardanza en transmitir la información dificultaba la labor de la Secretaría y que, por otra parte, su delegación lamentaba que Portugal no transmitiera información alguna y que el Reino Unido tampoco la enviara en lo tocante a Rhodesia del Sur, que indudablemente seguía siendo una colonia.

30. El Presidente sugirió que, si no había objeciones, se tomase nota del informe del Secretario General y se lo incluyera en el informe del Comité Especial a la Asamblea General.

31. El representante de la República Unida de Tanzania opinó que era necesario mencionar algunos de los temores manifestados acerca del retraso o de la insuficiencia de la información.

32. El representante de Túnez, apoyado por el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaró que la única información necesaria, a juicio de su delegación, era la fecha en que la Potencia Administradora se proponía proceder al traspaso de poderes previsto en el párrafo 5 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Por lo demás, estaba en general de acuerdo con los oradores precedentes en cuanto a la falta de cooperación de las Potencias administradoras, y apoyaba la sugestión del Presidente, con la adición propuesta por el representante de Tanzania. Pidió al Presidente que sugiriese una fórmula que reflejase el consenso del Comité Especial.

33. El Presidente sugirió un texto con arreglo al cual el Comité Especial tomaría nota del informe del Secretario General y del hecho de que algunas Potencias administradoras habían transmitido información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, y al mismo tiempo lamentaría que otras Potencias administradoras no lo hubiesen hecho así o lo hubieran hecho insuficientemente o demasiado tarde.

34. Los representantes de Malí y de la República Árabe Unida de Tanzania sugirieron que se señalara a la atención de la Asamblea General la falta de cooperación de ciertas Potencias administradoras y que se pidiera a estas últimas que suministraran información sobre la fecha en que se proponían dar la independencia a sus colonias.

35. El representante del Uruguay, apoyado por el representante de la India, convino en la fórmula sugerida por el Presidente y así mismo con los representantes de Malí y de Tanzania, pero estimó que la cuestión de la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era demasiado importante

para mezclarla con el tema de la transmisión de información.

36. El representante del Reino Unido declaró que su delegación no podía apoyar un texto de esa índole puesto que no se lo podría disociar de los debates precedentes y el Reino Unido era una de las Potencias administradoras a las que podría aparentemente referirse. Además, no podía estar de acuerdo con muchas de las declaraciones formuladas en el curso de los debates, en especial ciertas referencias a la carta enviada por Nueva Zelandia. Por otra parte, a la Potencia Administradora correspondía decidir el momento en que había de transmitir información sobre los territorios no autónomos en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, y también el alcance de tal información. No era cuestión de que el Gobierno del Reino Unido hubiese dejado de transmitir información, ni de que ésta fuese insuficiente.

37. El representante de los Estados Unidos de América reservó la posición de su delegación respecto de la fórmula sugerida por el Presidente.

38. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso de relieve que en realidad no existía entre los miembros del Comité el consenso que se recogía en dicha fórmula, puesto que varias delegaciones habían expresado ideas distintas y otras habían formulado reservas. Convenía, pues, si se deseaba llegar a un consenso, volver a examinar la cuestión más adelante.

39. El representante de Túnez señaló que las reservas quitaban todo el valor al consenso.

40. El representante de Malí consideraba asombroso que ciertas Potencias administradoras se negaran a cumplir lo dispuesto en el inciso e del Artículo 73 de la Carta, en cuya elaboración habían participado.

41. El representante de Australia se declaró de acuerdo con el representante del Reino Unido en que eran las Potencias administradoras las que habían de decidir en qué momento transmitirían la información solicitada.

42. En su 473a. sesión, celebrada el 19 de octubre de 1966, el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, aprobar como consenso del Comité el texto propuesto por el Presidente, en la inteligencia de que las observaciones de los representantes se consignarían en el acta de la sesión. El texto aprobado por el Comité está concebido en la forma siguiente:

“Los miembros del Comité Especial toman nota del informe del Secretario General. Toman nota asimismo del hecho de que algunas Potencias administradoras han transmitido información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta y lamentan que otras Potencias administradoras no lo hayan hecho así o lo hayan hecho insuficientemente o demasiado tarde.”

43. El Comité Especial decidió, además, incluir el informe del Secretario General en su informe a la Asamblea General. Ese documento se publica como apéndice al presente capítulo.

44. En la misma sesión el Comité Especial decidió, sin objeción alguna, transmitir a la Asamblea General la información contenida en los documentos de trabajo preparados por la Secretaría sobre los territorios que tal vez no pudiera examinar antes de clausurar

sus sesiones de 1966. Esa información figura en capítulos separados del presente informe.

APENDICE

[A/AC.109/203 y Add.1]

Información sobre territorios no autónomos transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas: informe del Secretario General

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN VIRTUD DEL INCISO e DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA

1. En el anterior informe del Secretario General sobre esta cuestión (A/6000/Rev.1, cap. XXVI, apéndice) se indicaron las fechas — hasta el 7 de septiembre de 1965 inclusive — en que se había transmitido información al Secretario General en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta. En el cuadro que figura al final del presente informe se indican las fechas en que se transmitió dicha información con respecto a los años 1964 y 1965.

2. La información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta se ajusta en general al formulario aprobado por la Asamblea General, e incluye datos sobre geografía, historia, población, condiciones económicas, sociales y de la enseñanza. En el caso de los Territorios bajo la administración de Australia, los Estados Unidos de América y Nueva Zelandia, se transmitieron los informes anuales sobre esos Territorios, que incluían también información sobre cuestiones constitucionales. En el curso de las sesiones del

Comité Especial, los representantes de Australia, España, los Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron también información adicional sobre la evolución política y constitucional en los Territorios bajo sus respectivas administraciones.

3. No se ha transmitido al Secretario General información alguna acerca de los Territorios bajo administración portuguesa, que en virtud de su resolución 1542 (XV) del 15 de diciembre de 1960 la Asamblea General consideró que eran Territorios no autónomos en el sentido del Capítulo XI de la Carta. El Secretario General tampoco ha recibido información relativa a Rhodesia del Sur, que según afirmó la Asamblea General en su resolución 1747 (XVI) del 28 de junio de 1962, es un Territorio no autónomo en el sentido del Capítulo XI de la Carta.

ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA EN VIRTUD DEL INCISO e DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA

4. En cumplimiento de las disposiciones del párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 1970 (XVIII) del 16 de diciembre de 1963, y del párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 2109 (XX) del 21 de diciembre de 1965, de la Asamblea General, en que se pidió al Comité Especial que estudiase la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, y de la conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Especial en 1964, la Secretaría continúa utilizando la información transmitida para preparar los documentos de trabajo que sobre cada uno de los Territorios destina al Comité Especial.

Fechas de transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta con respecto a los años 1964 y 1965

[En este cuadro se incluyen todos los Territorios enumerados en la primera parte, anexo II, del informe que la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos presentó a la Asamblea General en su decimotercer período de sesiones*, con excepción de Borneo Septentrional, Gambia, Jamaica, Kenia, Malta, Nyasalandia, Rhodesia del Norte, Sarawak, Singapur, Trinidad y Tabago, Uganda y Zanzíbar.]

	Fecha de transmisión	
	1964	1965
Australia (1° de julio-30 de junio) ^b :		
Islas Cocos (Keeling)	2 de febrero de 1965	
Papua	28 de julio de 1965	5 de agosto de 1966
España (año civil):		
Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni)	24 de febrero de 1965	28 de junio de 1966
Ifni	24 de febrero de 1965	28 de junio de 1966
Sáhara Español	24 de febrero de 1965	28 de junio de 1966
Estados Unidos de América (1° de julio-30 de junio):		
Guam	31 de agosto de 1965	8 de junio de 1966
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	31 de agosto de 1965	8 de junio de 1966
Samoa Americana	4 de febrero de 1966	
Francia (año civil):		
Archipiélago de las Comoras ^c	19 de mayo de 1966	
Nuevas Hébridas	19 de mayo de 1966	
Somalia Francesa ^c	19 de mayo de 1966	
Nueva Zelandia (1° de abril-31 de marzo) ^d :		
Islas Cook	14 de octubre de 1965	
Islas Niue	14 de octubre de 1965	
Islas Tokelau	14 de octubre de 1965	
Portugal:		
Angola	—	—
Archipiélago de Cabo Verde	—	—
Guinea Portuguesa	—	—

	Fecha de transmisión	
	1964	1965
Macao y sus dependencias	—	—
Mozambique	—	—
Santo Tomé y Príncipe y sus dependencias	—	—
Timor portugués y sus dependencias	—	—
Reino Unido (año civil):		
Adén	31 de agosto de 1965	6 de julio de 1966
Antigua	20 de agosto de 1965	
Bahamas	31 de agosto de 1965	5 de agosto de 1966
Barbada	24 de agosto de 1965	
Basutolandia	5 de noviembre de 1965	
Bechuania	1° de junio de 1965	17 de mayo de 1966
Bermudas	2 de septiembre de 1965	13 de septiembre de 1966
Brunei	26 de julio de 1965	20 de septiembre de 1966
Dominica	2 de julio de 1965	
Gibraltar	2 de diciembre de 1965	1° de septiembre de 1966
Granada	7 de julio de 1965	29 de septiembre de 1966
Guayana Británica	7 de septiembre de 1965	
Honduras Británica	16 de julio de 1965	
Hong Kong	7 de junio de 1965	1° de junio de 1966
Isla Pitcairn	7 de junio de 1965	18 de abril de 1966
Islas Caimán	11 de octubre de 1965	13 de junio de 1966
Islas Malvinas (Falkland Islands) ..	2 de julio de 1965	17 de agosto de 1966
Islas Gilbert y Ellice	2 de septiembre de 1965	26 de agosto de 1966
Islas Salomón	14 de junio de 1965	1° de agosto de 1966
Islas Turcas y Caicos	2 de septiembre de 1965	
Islas Vírgenes Británicas	24 de agosto de 1965	
Mauricio	26 de junio de 1965	22 de julio de 1966
Montserrat	26 de octubre de 1965	
Nuevas Hébridas	1° de septiembre de 1965	22 de julio de 1966
Rhodesia del Sur	—	—
San Vicente	30 de agosto de 1965	23 de septiembre de 1966
San Cristóbal-Nieves-Anguila	29 de septiembre de 1965	22 de septiembre de 1966
Santa Elena	28 de julio de 1965	1° de agosto de 1966
Santa Lucía	2 de septiembre de 1965	1° de septiembre de 1966
Seychelles	23 de julio de 1965	
Swazilandia	1° de octubre de 1965	29 de septiembre de 1966
Viti	9 de junio de 1965	12 de agosto de 1965

^a Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimotavo período de sesiones, Suplemento No. 14 (A/5514), primera parte, anexo II.

^b El período se extiende del 1° de julio del año precedente al 30 de junio del año indicado.

^c El 27 de marzo de 1959 el Gobierno de Francia notificó al Secretario General que como este territorio había alcanzado la autonomía interna, la transmisión de información sobre el mismo había cesado a partir de 1957.

^d El período se extiende del 1° de abril del año indicado hasta el 31 de marzo del año siguiente.

ANEXO*

Lista de delegaciones

AFGANISTÁN

Representante

Excmo. Sr. Abdul Rahman Pazhwak

Suplentes

Sr. Ghulam Ghaus Waziri

Sr. Mohammad Mirza Sammah

AUSTRALIA

Representantes

Excmo. Sr. Patrick Shaw, C. B. E.

Sr. Dudley McCarthy, M. B. E.

Suplente

Sr. B. B. Hickey

Asesor

Sr. A. C. Wilson (hasta abril 1966)

BULGARIA

Representantes

Excmo. Sr. Milko Tarabanov

Sr. Matey Karasimeonov

Sr. Dimiter Sabev

COSTA DE MARFIL

Representante

Excmo. Sr. Siméon Aké

Suplentes

Sr. Julien Kacou

Sr. Jean-Marie Kakou Gervais

Sr. Joseph Laga (hasta septiembre 1966)

CHILE

Representante

Excmo. Sr. José Piñera

Suplente

Sr. Javier Illanes

Asesor

Sr. Jorge Huneeus

DINAMARCA

Representante

Excmo. Sr. Hans R. Tabor

Suplente

Sr. Skjold G. Mellbin

Asesor

Sr. Martin Kofod

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Representante

Excma. Sra. Eugenie M. Anderson

Suplente

Sr. Richard E. Johnson

Asesor

Sr. Ernest C. Grigg, III

ETIOPÍA

Representantes

Excmo. Sr. Tesfaye Gebre-Egzy (hasta mayo 1966)

Excmo. Lij Endalkachew Makonnen (desde julio 1966)

Suplentes

Sr. Girma Abebe (hasta mayo 1966)

Sr. Berhane Deressa

Srta. Kongit Sinegiorgis

INDIA

Representante

Excmo. Sr. G. Parthasarathi

Suplentes

Sr. Brajesh C. Mishra

Sr. K. Natwar Singh (hasta marzo 1966)

Sr. C. R. Gharekhan

Asesor

Srta. M. Shivaraman (desde septiembre 1966)

IRAK

Representante

Excmo. Sr. Kadhim Khalaf

Suplentes

Sr. Ala'uddin H. Aljubouri

Sr. Salim A. Saleem

IRÁN

Representante

Excmo. Sr. Mehdi Vakil

Suplente

Sr. Mohsen S. Esfandiary

Asesor

Sr. Kambiz M. Ahy

ITALIA

Representante

Excmo. Sr. Piero Vinci

Suplentes

Sr. Ludovico Carducci Arsenio

Sr. Vincenzo Zito (hasta junio 1966)

Asesor

Sr. Alessandro Grandi

MADAGASCAR

Representante

Excmo. Sr. Louis Rakotomalala

Suplentes

Sr. Gabriel Rakotoniaina

Sr. Andiranampy Ramaholimihaso

Sra. Lucile Ramaholimihaso

MALÍ

Representantes

Excmo. Sr. Sori Coulibaly (hasta abril 1966)

Excmo. Sr. Moussa Keita (desde mayo 1966)

Sra. Jeanne Rousseau (hasta junio 1966)

Sr. Mamadou Moctar Thiam

* Publicado anteriormente en el documento A/6300 (parte I) como anexo III.

POLONIA

Representantes

Excmo. Sr. Bohdan Lewandowski (hasta julio 1966)
Excmo. Sr. Bohdan Tomorowicz (desde septiembre 1966)

Suplentes

Sr. Eugeniusz Wyzner
Sr. Jan Slowikowski
Sr. Wladyslaw Neneman

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Representante

Excmo. Sr. Muy Honorable Lord Caradon,
G. C. M. G., K. C. V. O.

Suplente

Sr. F. D. W. Brown

Asesores

Sr. D. J. Swan
Sr. B. L. Barder

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA

Representantes

Excmo. Sr. J. W. S. Malecela
Sr. Ali Mohammad Foun
Sr. Idi Mtwinga

SIERRA LEONA

Representante

Excmo. Sr. G. B. O. Collier

Suplentes

Sr. G. E. O. Williams
Sr. Frank P. Karefa-Smart

Asesor

Sr. Ambrose P. Genda

SIRIA

Representante

Excmo. Sr. George J. Tomeh

Suplentes

Sr. Rafic Jouéjati
Sr. Adnan Nachabe

Asesor

Sr. Adnan Omran

TÚNEZ

Representantes

Excmo. Sr. Taïeb Slim
Sr. Mongi Sahli
Sr. Amor Fezzani
Sr. Hamdan Ben Aïssa
Sr. Mohamed el Memmi

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

Representante

Excmo. Dr. N. T. Fedorenko

Suplente

Sr. P. F. Shajov

Asesores

Sr. V. I. Ustinov
Sr. V. I. Gapon
Sr. A. V. Grodsky

URUGUAY

Representante

Excmo. Sr. Pedro P. Berro

Suplentes

Sr. Mateo Marques Seré
Sr. Felipe Montero

VENEZUELA

Representante

Excmo. Sr. Pedro Zuloaga

Suplentes

Sr. Leonardo Díaz González (hasta julio 1966)
Sr. Tulio Alvarado (hasta octubre 1966)
Sr. Gilberto I. Carrasquero
Srta. María Clemencia López

YUGOSLAVIA

Representante

Excmo. Sr. Danilo Lekić

Suplente

Sr. Dimitar Janevski

*Organismos especializados**Organización Internacional del Trabajo*

Sr. Philippe Blamont
Sr. F. M. Abdel-Rahman

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Sr. Joseph L. Orr
Sr. Morris A. Green

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Sr. Arthur F. Gagliotti
Srta. Ruth Barrett

Organización Mundial de la Salud

Dr. Rodolphe L. Coigney
Sra. Sylvia Meagher